

## ÍNDICE

<b>AGRADECIMIENTOS.....</b>	<b>24</b>
<b>PRESENTACION.....</b>	<b>25</b>
<b>1. En torno a un objetivo de la presente investigación: El Patrimonio Cultural en el seno de los derechos patrimoniales como objetivo de la Historia del Derecho.....</b>	<b>25</b>
<i>1.1. El Patrimonio Cultural como objeto de la historia del arte y de las instituciones.....</i>	<i>25</i>
<i>1.2. EL Patrimonio Cultural como objeto de la historia del Derecho.....</i>	<i>26</i>
<i>1.3 La concepción patrimonialista del Derecho del Patrimonio Monumental de la España Liberal en la historiografía jurídica española. Una hipótesis de trabajo. ....</i>	<i>29</i>
<b>2. La base metodológica del trabajo de investigación.....</b>	<b>39</b>
<i>2.1. La elaboración de una conceptualización jurídica .....</i>	<i>40</i>
<i>2.2. La etapa escogida.....</i>	<i>40</i>
<i>2.3. La introducción del derecho comparado del Patrimonio Monumental en el periodo del Estado Liberal. ....</i>	<i>41</i>
<i>2.4. La elaboración de un apéndice documental.....</i>	<i>41</i>
<i>2.5. La impronta de la historia del derecho de la propiedad. ....</i>	<i>42</i>
<i>2.5. El carácter interdisciplinar de la investigación.....</i>	<i>43</i>
<i>2.6. Fuentes.....</i>	<i>43</i>
<b>CAPÍTULO I. LA AMBIGÜEDAD DEL CONCEPTO JURÍDICO DEL PATRIMONIO MONUMENTAL EN EL ESTADO LIBERAL Y SU PROYECCIÓN EN EL ÁMBITO ESPAÑOL.....</b>	<b>46</b>
<b>1. La construcción del concepto de Patrimonio Monumental en el ámbito del Estado Liberal. ....</b>	<b>46</b>
<i>1.1. A modo de introducción: el Patrimonio Cultural como reflejo de la identidad de una sociedad. ....</i>	<i>46</i>
<i>1.2. Los bienes configuradores del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal: La dicotomía bienes muebles e inmuebles en la configuración del Patrimonio Monumental.....</i>	<i>52</i>
<i>1.2.1. Los bienes inmuebles de interés histórico y artístico: De la individualidad del inmueble histórico a la invención del Patrimonio Urbano .....</i>	<i>53</i>
- El Patrimonio Arquitectónico.....	53
- La configuración del entorno como marco protector del patrimonio histórico: La invención del patrimonio urbano.....	57
<i>1.2.2. Los bienes muebles de interés histórico y artístico: Los bienes de artes plásticas.....</i>	<i>66</i>
<i>1.2.3. La gestación de los llamados Patrimonios Especiales: El Patrimonio Arqueológico y el Patrimonio Documental.....</i>	<i>67</i>
- Patrimonio Arqueológico.....	67
- Patrimonio numismático y epigráfico.....	72
- Patrimonio documental.....	72
<i>1.2.4. El Valor Monumental como fundamento jurídico de la protección del Monumento Histórico-Artístico en el Estado Liberal. ....</i>	<i>73</i>

## **2. Los derechos patrimoniales como marco jurídico del derecho del patrimonio monumental en el Estado Liberal. .... 85**

### **2.1. El derecho de la propiedad como principio jurídico del ordenamiento liberal. .... 85**

2.1.1. *El derecho de la propiedad privada como categoría absoluta en el ordenamiento liberal.* 85

2.1.2. *Los límites del derecho absoluto de la propiedad privada en el ordenamiento liberal. El principio del interés general como fundamento de la intervención del Estado en la esfera privada.* 93

### **2.2. El papel del Estado como sujeto tutelar del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal en el ámbito de los derechos patrimoniales: Un ensayo frustrado de la construcción jurídica del Patrimonio Monumental como Bien de Dominio Público en el Estado Liberal. .... 97**

2.2.1. *La configuración del sistema normativo en el Estado Liberal: La primacía del derecho privado sobre el derecho público en la configuración del sistema normativo del Patrimonio Monumental.*.....101

2.2.2. *La transformación jurídica del Patrimonio Monumental Estamental en el Estado Liberal.* 112

2.2.2.1. La tutela específica del Patrimonio Monumental Eclesiástico..... 112

2.2.2.2. La tutela del Patrimonio Monumental Monárquico. .... 119

#### **2.2.3 La tutela pública del Patrimonio Monumental de Dominio Privado. ....120**

2.2.3.1 El Patrimonio Histórico-Artístico en el sistema de derechos y libertades individuales del Estado Liberal. .... 120

-El coleccionismo artístico como fenómeno social y cultural: La relación ente el propietario y el objeto artístico poseído.....121

- El Patrimonio Monumental como bien inherente al propietario. ....125

2.2.3.2 Los límites del derecho de la propiedad privada: Las técnicas de la policía administrativa. 131

- La declaración formal del Patrimonio Monumental: un límite a la libre disponibilidad de los bienes de interés histórico y artístico. Catalogación e Inventarización como instrumentos administrativos. ....132

- La configuración jurídica de la Restauración Inmobiliaria: el deber de conservación del propietario privado de los inmuebles históricos. ....136

- La intervención de la Administración en el ámbito urbanístico: el triunfo del espacio público burgués. ....142

- La regulación del tráfico jurídico de los bienes muebles de carácter histórico-artístico. 148

- La singular protección del patrimonio arqueológico.....150

- La protección pública del Patrimonio Arqueológico en el Estado Liberal. ....150

2.2.4. *La tutela del Estado sobre las Corporaciones Municipales en el ámbito de la conservación de bienes de interés histórico-artístico.*.....151

2.2.5. *La acción del Estado en la tutela del Patrimonio Monumental: los límites de la intervención administrativa.*.....151

2.2.5.1. La institucionalización administrativa en la tutela patrimonial..... 151

2.2.5.2. El destino de los Bienes Histórico-Artísticos: La institucionalización administrativa del Museo, Archivo y Biblioteca Pública. .... 154

- El concepto de Archivo Público. ....154

- La configuración del Museo Público en el Estado Liberal. ....155

- La Biblioteca Pública: Un servicio público de divulgación cultural en el Estado Liberal. ....158

## **3. La transformación de la propiedad monumental y su impronta en el proceso histórico del Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Público en el Estado Liberal. .... 159**

### **3.1. A modo de precedente: Una incipiente concepción pública del Patrimonio Monumental en el Despotismo Ilustrado. .... 160**

3.1.1. *Las antigüedades como objeto de tutela pública de la Monarquía Ilustrada.*.....163

- Las antigüedades como fundamento político-jurídico del poder del rey.....163

-Las antigüedades como objeto de la investigación científica. ....164

3.1.2. *Las colecciones regias como bien de interés público en la segunda mitad del siglo XVIII: de la privacidad de los bienes históricos-artísticos a la apertura pública de las galerías reales.* 166

3.1.3. *La regulación del Patrimonio Monumental en la Italia Preunitaria.*.....171

- Las disposiciones del Papado sobre tutela del Patrimonio Monumental.....171

- Toscana.....	177
- Nápoles.....	179
- Venecia.....	180
<b>3.1.4. El Alvará Regio de 20 de agosto de 1721 como precedente de la tutela pública de carácter regio en el ámbito del derecho europeo.....</b>	<b>180</b>
<b>3.1.5. La tutela del Patrimonio Monumental en el ámbito de la Monarquía francesa: un modelo a imitar en las cortes regias europeas.....</b>	<b>181</b>
<b>3.1.6. Otras disposiciones normativas de tutela pública en la Europa de la Ilustración.....</b>	<b>183</b>
<b>3.2. La génesis de la tutela pública del Patrimonio Monumental a raíz de los procesos revolucionarios de la Francia Contemporánea (1789-1814).....</b>	<b>184</b>
<b>3.2.1. La transformación de la propiedad estamental monumental en bienes de dominio público en la Francia revolucionaria.....</b>	<b>185</b>
- Un nuevo significado del Patrimonio Monumental en las convulsiones del proceso revolucionario francés: La desvinculación estamental del Patrimonio Monumental y su transformación en Bienes de Interés Nacional.....	185
- Conservación y vandalismo como debate generador de la conciencia pública del Patrimonio Monumental desde la convocatoria de los Estados Generales a la caída de la Monarquía (10 de agosto de 1792).....	189
- De la iconoclasia revolucionaria a la tutela pública del Patrimonio Monumental Estamental: La génesis institucional del museo público en la Francia Revolucionaria.....	192
<b>3.2.2. Los expolios napoleónicos y la génesis de la conciencia nacional del Patrimonio en el ámbito europeo de principios del siglo XIX. Las Cartas a Miranda de Quatréme de Quincy.....</b>	<b>202</b>
- La supuesta creación del museo napoleónico.....	202
- Un debate doctrinal sobre la protección de los bienes de interés histórico y artístico en el ámbito del derecho internacional: Las Cartas a Miranda de Quatréme de Quincy.....	204
- Las disposiciones del Congreso de Viena en el ámbito de la tutela pública del Patrimonio Monumental.....	207
<b>3.2.3. El derecho de la propiedad privada en el coleccionismo artístico bugues de la Francia Revolucionaria.....</b>	<b>208</b>
<b>3.3. La consagración del derecho absoluto de la propiedad como principio ordenador del sistema normativo y su proyección en la tutela del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal.....</b>	<b>208</b>
<b>3.3.1. La construcción del Patrimonio Monumental como bien inherente al propietario. ....</b>	<b>210</b>
- La consagración del derecho de la propiedad privada como derecho absoluto y sus controversias con el principio de interés nacional en la delimitación del Estado-Nación.....	210
- La configuración del Monumento Histórico-Nacional como fundamento jurídico-ideológico del Estado Nación.....	213
<b>3.3.2. Los expolios arqueológicos y el despertar nacionalista del Patrimonio Monumental: la experiencia griega.....</b>	<b>221</b>
<b>3.3.3. El ordenamiento jurídico de los Estados Preunitario Italianos como un precedente de una verdadera regulación normativa de carácter público del Patrimonio Histórico-Artístico.....</b>	<b>222</b>
- El Papado: El quirógrafo del Papa Pío VII y el Edicto Pacca.....	223
- Los límites del tráfico de obras de arte en el Reino de Nápoles: el Decreto de Fernando II de 16 de septiembre de 1839.....	225
<b>3.3.4. La génesis de la institucionalización administrativa del Patrimonio Histórico-Artístico en el derecho francés.....</b>	<b>227</b>
- El Informe Guizot: Un ensayo de la institucionalización administrativa del Patrimonio Monumental.....	228
- La tutela pública sobre el Patrimonio Monumental Eclesiástico en la Francia liberal.....	229
<b>3.3.5. La experiencia liberal en el ámbito del derecho portugués: un ensayo europeo en la configuración del Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Nacional.....</b>	<b>231</b>
<b>3.4. La quiebra del derecho absoluto de la propiedad y su proyección en el sistema normativo del Patrimonio Monumental en la crisis del Estado Liberal (1880-1914).....</b>	<b>234</b>
<b>3.4.1. La quiebra del Patrimonio Monumental como bien inherente al propietario.....</b>	<b>235</b>
- La propiedad privada como derecho relativo y la incipiente función social de la propiedad en la crisis del Estado Liberal.....	236

- La defensa del interés público como principio informador del ordenamiento jurídico del Patrimonio Monumental en el ámbito doctrinal de principios del siglo XX: Las teorías de Riegls.....	240
<b>3.4.2. La tutela privada del Patrimonio Monumental en Gran Bretaña (1882-1913). .....</b>	<b>248</b>
<b>3.4.3. La definición jurídica del Monumento Histórico-Artístico Nacional en el derecho francés en la crisis del Estado Liberal. ....</b>	<b>251</b>
- Un precedente de intervención administrativa: La Ley de 30 de marzo de 1887. ....	254
- La Ley de 1905 de separación de Iglesia y Estado y el destino de los bienes del Patrimonio Monumental Eclesiástico. ....	256
- La Ley de 21 de abril organizando la protección de sitios y monumentos de carácter artístico y la Ley de 9 de diciembre de 1906: La clasificación de los Monumentos. ....	257
- La Ley de inspectores Generales de Monumentos Históricos de 30 de abril de 1908. ....	258
- El triunfo de la intervención administrativa de la tutela pública del Patrimonio Monumental: La Ley de 1913. ....	258
<b>3.4.4. La impronta de la legislación italiana en la configuración jurídica del Patrimonio Histórico a principio del siglo XX (1860-1939). ....</b>	<b>260</b>
- Código Albertino de 1865 y la Ley 2539 de 25 de junio de 1865. ....	261
- La Ley 12 de junio de 1902 y el Reglamento de 17 de julio de 1904. ....	262
- La Ley de 1909, Ley 364, La Ley Rosadi y el Reglamento de 30 de junio de 1913 n.363. ....	266
<b>3.4.5. La Ley de 1902 del Estado de Hesse: la primera promulgación de la Ley de Patrimonio Monumental en Alemania. ....</b>	<b>267</b>
<b>3.4.6. El derecho portugués de principios del siglo XX. ....</b>	<b>269</b>
<b>3.5. La incipiente función social de la propiedad y su proyección en la tutela del Patrimonio Monumental en el periodo de entreguerras (1915-1939). ....</b>	<b>269</b>
<b>3.5.1. La inclusión de la tutela del Patrimonio Monumental en el ámbito del derecho constitucional liberal. ....</b>	<b>269</b>
<b>3.5.2. La consagración de los sistemas normativos fundamentado en el principio del Patrimonio Monumental como bien de interés público. ....</b>	<b>270</b>
- La configuración del Patrimonio Monumental como bien de interés público en el derecho hispanoamericano durante los primeros decenios del siglo XX. ....	270
- El modelo austriaco de tutela pública del Patrimonio Monumental: La Ley del Patrimonio Histórico de 1923. ....	285
- Bélgica: La Ley del 7 de agosto de 1931. ....	288
- Portugal: El Decreto núm. 20.985, de 7 de marzo de 1932. ....	288
- Brasil: Decreto-Ley nº 25 de 30 de noviembre de 1937. ....	293
- Un verdadero antecedente en el derecho contemporáneo del Patrimonio Monumental: La Ley 1-VI-1939. N.1089 de Italia. ....	293
- El Patrimonio Arqueológico como objeto de tutela pública en el derecho colonial. ....	295
<b>3.5.3. Hacia la configuración de un derecho internacional del Patrimonio Monumental. ....</b>	<b>295</b>
- El deber de restitución de los bienes culturales a sus legítimos propietarios en caso de acontecimientos bélicos. ....	295
- La regulación internacional de la restauración de los bienes de interés histórico y artístico: La Carta de Atenas de 1931. ....	300
- La Carta Italiana de Restauro de 1932. ....	301
- La Carta Atena de Urbanismo de 1933. ....	302
<b>4. Las peculiaridades del régimen tutelar del patrimonio monumental en el seno de los derechos patrimoniales en la España liberal. ....</b>	<b>304</b>
<b>4.1. La ambigüedad del Patrimonio Monumental en el ordenamiento español. ....</b>	<b>304</b>
- Del Patrimonio Arquitectónico al Patrimonio Urbano Monumental. ....	307
- Patrimonio Arqueológico. ....	308
- Patrimonio Documental. ....	311
<b>4.1.2. El Interés Nacional como fundamento jurídico de la intervención estatal en el ámbito del derecho privado. ....</b>	<b>311</b>
<b>4.2. La construcción jurídica del Patrimonio Monumental en el seno de los derechos patrimoniales: Un ensayo frustrado del Patrimonio Monumental como Bien de Interés Público en la España Liberal. ....</b>	<b>314</b>
<b>4.2.1. Los derechos patrimoniales como eje del ordenamiento jurídico de la España Liberal: La primacía del derecho de la propiedad privada sobre el interés general en el ordenamiento jurídico liberal español. ....</b>	<b>317</b>



4.2.1.1. La consagración del derecho de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico de la España Liberal.....	318
4.2.1.2. Un incipiente interés general en el ordenamiento jurídico del Estado Liberal.....	320
<b>4.2.2. El Patrimonio Monumental en el ámbito de la construcción jurídica del Dominio Público de la España Liberal: La transformación jurídica del Patrimonio Monumental Estamental como bienes nacionales.....</b>	<b>321</b>
4.2.2.1. La peculiar tutela del Patrimonio Eclesiástico Monumental.....	322
4.2.2.2. Un nuevo Patrimonio Monumental en la España Liberal: Del Patrimonio Monárquico a la concepción del Patrimonio Nacional.....	328
<b>4.2.3. Los límites de la tutela pública de los bienes de interés histórico y artístico en el dominio privado en la España Liberal.....</b>	<b>333</b>
4.2.3.1. El Patrimonio Monumental como derecho inherente del propietario privado.....	333
4.2.3.2. Las técnicas de policía administrativa de la tutela del Patrimonio Monumental.....	336
- La declaración del Bien de Interés Nacional como procedimiento administrativo de la tutela del Patrimonio Monumental como Bien Público.....	336
- Los deberes de conservación del patrimonio inmobiliario monumental en el seno de la propiedad privada: La cuestión de la Restauración Inmobiliaria en la España Liberal.....	338
- La tutela pública del Patrimonio Arqueológico.....	340
- El control de la exportación de los bienes muebles: la incorporación del derecho de retracto y tanteo en el ordenamiento jurídico liberal.....	343
- Hacia un sistema sancionador del Patrimonio Cultural en el ámbito del interés privado.....	345
<b>4.2.4. Un incipiente derecho urbanístico en torno a la conservación del Patrimonio Histórico Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico.....</b>	<b>348</b>
<b>4.2.5. La intervención del Estado en la tutela del Patrimonio Monumental.....</b>	<b>350</b>
4.2.5.1. La configuración de una institucionalización administrativa de tutela pública del Patrimonio Monumental.....	350
4.2.5.2. Las medidas de fomento en la tutela pública del Patrimonio Monumental.....	353
4.2.5.3. Inventario y Catalogación en el ámbito del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en la España Liberal.....	354
4.2.5.4. La configuración inicial de los servicios públicos en la España Liberal: La institucionalización del museo público, Biblioteca Pública y los Archivos Nacionales.....	355

## **CAPÍTULO II. LAS BASES JURÍDICAS DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL PATRIMONIO MONUMENTAL EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN COMO PRECEDENTE DEL MODELO LIBERAL: EL PATRIMONIO MONUMENTAL COMO BIEN PÚBLICO.....363**

### **1. La quiebra del derecho de la propiedad estamental y el advenimiento del derecho de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico de la monarquía ilustrada..... 368**

### **2. La quiebra de la concepción del patrimonio monumental estamental y su configuración como bien de interés público en la construcción de la monarquía ilustrada..... 374**

#### **2.1. Una peculiar concepción pública del Patrimonio Monumental Regio en la España de los Borbones.....374**

##### **2.1.1. Las antigüedades como referente de exaltación de la Monarquía ilustrada..... 374**

##### **2.1.2. La peculiar naturaleza jurídica del Patrimonio Monumental Regio en la Monarquía Ilustrada..... 378**

###### 2.1.2.1. La apertura pública de las galerías reales y las bibliotecas reales..... 379

###### 2.1.2.2. El régimen patrimonialista de los testamentos regio: los bienes vinculados y los bienes privados de la Corona..... 383

#### **2.2. Una incipiente tutela pública del Patrimonio Eclesiástico Monumental en la España de los Borbones.....386**

##### **2.2.1. El debate doctrinal sobre el derecho de la propiedad eclesiástica y su proyección sobre la tutela del Patrimonio Monumental..... 386**

##### **2.2.2. Un ensayo del proceso de nacionalización del Patrimonio Monumental Eclesiástico y su proyección en la conservación de los bienes de interés histórico y artístico..... 390**

###### 2.2.2.1. El destino de los bienes de la Compañía de Jesús a raíz de las medidas confiscatorias del reinado Carlos III..... 390

2.2.2.2. Un ensayo desamortizador en el reinado de Carlos IV: La Real Orden de 25 de septiembre de 1798 y el proyecto frustrado de un museo nacional de bienes religiosos.....	395
2.2.3. <i>La tutela pública de la restauración inmobiliaria, especialmente los religiosos: Los Reales decretos de 23 y 25 de noviembre de 1777 por el que la Real Academia de San Fernando alcanzaba el control de los edificios públicos.</i> .....	396
<b>3. La ambigüedad de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico en el ámbito del dominio privado.....</b>	<b>403</b>
3.1. <i>Las antigüedades en el ámbito del coleccionismo de los anticuarios y comerciantes y la iniciativa regia en la segunda mitad del siglo XVIII: Intereses políticos y científicos en el camino de la profesionalización de las excavaciones arqueológicas.</i> .....	403
3.1.1. <i>La iniciativa regia en la tutela de las antigüedades. Los viajes literarios.</i> .....	403
3.1.2. <i>Las antigüedades en el ámbito del coleccionismo de los anticuarios y comerciantes en la segunda mitad del siglo XVIII.</i> .....	406
3.2. <i>La génesis de la política institucional de protección del Patrimonio Arqueológico. Monumental en el reinado de Felipe V y Fernando VI.</i> .....	408
3.2.1. <i>Una incipiente tutela administrativa a instancia de la Monarquía: Las Reales Academias.</i> .....	408
3.2.2. <i>La Instrucción del marqués de la Ensenada dirigida a Francisco Barrero Peláez, Intendente de Marina del Departamento de Cartagena (R.O. del 8 de abril de 1752).</i> .....	411
3.2.3. <i>La Instrucción que ha de observar D. Luís José Velázquez, Marqués de Valdeflores, de la Real Academia de la Historia en el viaje a que está destinado para averiguar y reconocer las antigüedades de España, siendo aprobada por Real Orden de 2 de noviembre de 1752.</i> .....	412
3.3. <i>La concepción pública del dominio arqueológico: El modelo administrativo de las excavaciones de Herculano y Pompeya y su proyección en la España Borbónica.</i> .....	415
3.4. <i>Las prerrogativas de los particulares y el interés regio en la configuración del primer sistema normativo del Patrimonio Arqueológico en el reinado de Carlos IV: La Real Cédula de 1803.</i> .....	423
3.4.1. <i>La confección de la Real Cédula de 1803: El Plan General para la conservación de los monumentos antiguos confeccionado por los académicos de la Historia, José de Guevara, Tragia y Bossarte.</i> .....	423
3.4.2. <i>Análisis de la Ley.</i> .....	426
3.4.3. <i>La aplicación de la Real Cédula de 1803: La Real resolución del 25 de junio de 1806.</i> 430	
3.4.4. <i>Novísima Recopilación</i> .....	431
<b>4. La gestación de una normativa sobre el tráfico de obras de arte en el ámbito del dominio privado.....</b>	<b>431</b>
4.1. <i>Un crecientemente coleccionismo de obras de arte en el ámbito de los particulares.</i> .....	431
4.2. <i>Las Reales Órdenes del 5 de octubre de 1779 y 16 de octubre de 1779, prohibiendo la exportación de bienes de interés histórico y artístico y antigüedades.</i> .....	435
4.3. <i>Un caso de confiscación de los bienes artísticos como medida limitadora del tráfico de obras de arte: El destino de la colección de Manuel Godoy.</i> .....	439
<b>5. El principio de ornato como deber del ciudadano en el ámbito del régimen de la policía urbana en la España de la Ilustración: Las ordenanzas de ornato como instrumento jurídico de intervención estatal.....</b>	<b>441</b>
 <b>CAPITULO III LA IRRUPCIÓN DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO LIBERAL EN EL SISTEMA NORMATIVO ESPAÑOL Y SU PROYECCIÓN EN LA TUTELA PÚBLICA DEL</b>	

**PATRIMONIO MONUMENTAL EN LA CONFIGURACIÓN INICIAL DEL ESTADO LIBERAL (1808-1835).....448**

**1 Una nueva concepción del derecho de la propiedad en la configuración inicial del Estado Liberal: Capitalización y abolición del feudalismo como principios inspiradores del sistema normativo. .... 452**

**1.1. La abolición del derecho de la propiedad estamental de carácter feudal en el sistema normativo español: Una encrucijada de contradicciones entre la modernidad y el absolutismo. ....452**

1.1.1. La abolición de los señoríos como punto de partida en el camino de la capitalización de los bienes de propiedad señorial. .... 453

1.1.2. El camino de la capitalización del derecho estamental de la propiedad eclesiástica en la configuración inicial del Estado Liberal: Las medidas desamortizadoras. .... 457

**1.2. La inclusión del derecho de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico: la configuración del Estado de los propietarios. ....463**

1.2.1. El derecho absoluto de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico de la construcción inicial del Estado Liberal. .... 463

1.2.2. La expropiación forzosa como delimitador del derecho absoluto de la propiedad privada: Real decreto de 17 de julio de 1836. .... 470

**2. La configuración inicial del patrimonio monumental estamental como bienes nacionales a raíz de los procesos revolucionarios. .... 472**

**2.1. La irrupción del modelo tutelar monumental de la Francia Napoleónica: La concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico Estamental como Bien de Interés nacional. ....472**

2.1.1. Destrucción y conservación como principios delimitadores de la conciencia nacional del Patrimonio Monumental en la España Josefina. .... 474

2.1.1.1. Una mirada crítica a la destrucción patrimonial. .... 474

2.1.1.2. La génesis de la conciencia nacional del Patrimonio Histórico-Artístico a raíz de la destrucción patrimonial. .... 477

2.1.2. La transformación jurídica de los bienes históricos y artísticos del Patrimonio Monumental en bienes de dominio público: La conversión del Patrimonio Conventual Inmueble en edificios de interés público. .... 478

2.1.3. La génesis del Museo Josefino como destino de los bienes muebles nacionalizados del Patrimonio eclesiástico y real: el Decreto de 20 de diciembre de 1809. .... 484

2.1.4. Algunas disposiciones sobre prohibición de exportación de los bienes conventuales: El Real Decreto de 1 de agosto de 1810. .... 490

2.1.5. La configuración inicial del espacio público en la España josefina: el urbanismo josefino. 490

**2.2. Absolutismo y Liberalismo en la tutela del Patrimonio Monumental Estamental en el reinado de Fernando VII: Devolución y confiscación como reflejo del intervencionismo del Estado. ....494**

2.2.1. La impronta del Congreso de Viena en el ámbito español: la recuperación de una mínima parte del Legado Monumental tras los expolios napoleónicos. .... 494

2.2.2. La devolución de los bienes históricos-artísticos del Patrimonio Conventual expoliado a las órdenes religiosas: la Real Orden del 20 de mayo de 1814, relativa a que se haga entrega a los Regulares de sus conventos y propiedades. .... 499

2.2.3. La irrupción de las medidas desamortizadoras en la delimitación de la Propiedad del Patrimonio Eclesiástico Monumental como bienes nacionales en el Trienio Constitucional. 502

2.2.3.1. Algunas disposiciones legales de protección de los bienes de interés histórico y artístico desamortizados: el Decreto del 25 de octubre de 1820. .... 502

2.2.3.2. Una nueva concepción pública del Patrimonio Conventual Monumental desamortizado. .. 507

2.2.3.3. La génesis de una Administración tutelar del Patrimonio Monumental Expoliado: El papel de los Jefes Políticos Provinciales. .... 508

2.2.3.4. El destino de los bienes desamortizados: el ensayo frustrado del museo público. .... 511

2.2.4. Una nueva devolución de los bienes conventuales del Patrimonio Monumental durante la década absolutista: Real decreto de 24 de octubre de 1823. .... 511

<b>2.3. Un ensayo frustrado del sistema administrativo de protección del Patrimonio Monumental Eclesiástico y su confrontación con los intereses de los particulares durante la etapa de las Regencias. ....</b>	<b>512</b>
<b>2.3.1. El despertar de la conciencia pública del Patrimonio Monumental Desamortizado. ...</b>	<b>514</b>
2.3.1.1. Un nuevo capítulo de destrucción patrimonial español. ....	515
2.3.1.2. Una nueva concienciación patrimonial El papel de las revistas románticas en la protección patrimonial: Los artículos de Cardera y el Manifiesto de Larra. ....	518
<b>2.3.2. La tutela pública del Patrimonio Monumental durante los gobiernos de Martínez de la Rosa y el Conde de Toreno: Las Comisiones Civiles. ....</b>	<b>522</b>
<b>2.3.3. El modelo administrativo en el primer periodo del ministro Mendizábal (14 de septiembre de 1835-15 de mayo de 1836). ....</b>	<b>527</b>
2.3.3.1. Las Juntas de intervención de objetos de ciencia y arte. ....	529
2.3.3.2. Las Comisiones de Amortización. ....	531
2.3.3.3. Los Museos de Bellas Artes provinciales. El Museo provincial de Sevilla y Cádiz. ....	533
<b>2.3.4. Un nuevo modelo administrativo en la segunda etapa del Gobierno de Mendizábal (agosto de 1836-julio de 1837). ....</b>	<b>538</b>
2.3.4.1. Las Juntas que ha de entender en la enajenación de los edificios de conventos, y sus muebles y efectos: Real decreto de 13 de septiembre de 1836. ....	538
2.3.4.2. La intervención de la Real Academia de San Fernando en la tutela del patrimonio conventual expoliado de interés histórico y artístico: Las comisiones culturales y artísticas de la Real Academia de San Fernando y la fundación del Museo de la Trinidad, germen del museo público español. ....	540
2.3.4.3. Las Comisiones Científicas y Artísticas. Real Orden de 27 de mayo de 1837. ....	545
2.3.4.4. El destino de los bienes muebles conventuales: el caso de las joyerías y pedrerías de los conventos. ....	549
2.3.4.5. Los Archivos Monacales como génesis del Archivo Público. ....	551
<b>2.3.5. Las medidas protectoras durante el régimen del general Espartero. ....</b>	<b>553</b>
<b>3. Una nueva concepción jurídica del patrimonio monumental regio: el patrimonio real como dominio privado de interés nacional. ....</b>	<b>554</b>
<b>3.1. Dominio Privado y Concepción Pública del Patrimonio Regio Monumental en el reinado de Fernando VII. ....</b>	<b>555</b>
3.1.1. La impronta del constitucionalismo docentista en la tutela del Patrimonio Monumental Regio. ....	556
3.1.2. La creación de un Museo de pinturas fundamentado en el coleccionismo privado de la Monarquía: La gestación del Museo del Prado. ....	558
3.1.3. El carácter privado de los bienes de interés histórico y artístico del Patrimonio Regio en el testamento de Fernando VII. ....	561
<b>3.2. Hacia la concepción pública de las colecciones reales durante el periodo de las Regencias. ....</b>	<b>561</b>
<b>4. La incorporación del derecho absoluto de la propiedad privada como fundamento jurídico en la construcción del derecho del patrimonio monumental de la etapa inicial del liberalismo español. ....</b>	<b>563</b>
<b>4.1. Un ensayo frustrado de la construcción del Patrimonio arqueológico como bien de dominio público. ....</b>	<b>563</b>
4.1.1. Un precedente de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico: El Decreto del 6 de febrero de 1810 para la ciudad de Itálica. ....	563
4.1.2. La impronta del derecho de la propiedad privada del ordenamiento liberal en la tutela pública del Patrimonio Arqueológico durante el reinado de Fernando VII. ....	564
4.1.2.1. Arqueología científica y expolio arqueológico como práctica habitual en la España de Fernando VII. ....	565
4.1.2.2. La vigencia de la Real Cédula de 1803: Las Circulares de 2 de octubre de 1818 y 19 de septiembre de 1827. ....	566
4.1.2.3. Un proyecto frustrado: la fundación de un Museo de Antigüedades por la Real Academia de la Historia. ....	571
4.1.3. Una frustrada tutela pública del Patrimonio Monumental Privado en base al respeto absoluto del derecho de la propiedad durante la etapa de las Regencias. ....	572
4.1.3.1. Los límites del derecho de la propiedad privada en la construcción del Derecho Público del Patrimonio Arqueológico. ....	572

- La denegación de adquisición de bienes arqueológicos de dominio público por un particular: La Academia de la Historia desestima la pretensión de excavación arqueológica de Domingo Ranchi. ....	573
- La autorización de excavaciones arqueológicas a los particulares en dominio público. ....	574
4.1.3.2. Un nuevo ensayo frustrado de la Administración tutelar del Patrimonio Arqueológico. ....	575
- Los conflictos institucionales en la tutela de yacimientos arqueológicos de dominio público: El proyecto de Ivo de Cartona de Itálica y su confrontación con la Real Academia de la Historia. ....	575
- Los inspectores de antigüedades. ....	577
- Las instituciones privadas. ....	579
4.1.3.3. El destino de los bienes arqueológicos descubiertos en fundos públicos: La configuración de los museos arqueológicos provinciales. El Museo Arqueológico de Sevilla. ....	580
<b>4.2. Los límites de la intervención administrativa en la regulación del comercio de obras de arte de propiedad privada. ....</b>	<b>581</b>
<b>4.2.1. El coleccionismo privado emergente en la España de Fernando VII y las necesidades de una regulación jurídica. ....</b>	<b>581</b>
<b>4.2.2. Un nuevo ensayo regulador del tráfico de obras de arte en la etapa de la Regencia. ..</b>	<b>583</b>
4.2.2.1. Una intensa actividad comercial de los bienes de interés histórico y artístico como reflejo de la libre disposición de uso y gozo del propietario privado en la etapa de las Regencias. ....	583
4.2.2.2. Algunas disposiciones limitando la libre disposición del propietario privado: Las Reales ordenes de 2 de septiembre de 1836, 28 de abril de 1837 y 20 de agosto de 1838, regulando el tráfico comercial de las obras de arte. ....	588
<b>4.3. La configuración de un procedimiento sancionador en el ámbito de la tutela pública del Patrimonio Histórico-Artístico durante el Trienio Constitucional. La confiscación de la colección de bienes muebles de interés histórico y artístico de Godoy. ....</b>	<b>590</b>

## **CAPÍTULO IV. EL TRIUNFO DE LA CONCEPCIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO MONUMENTAL COMO BIEN INHERENTE AL PROPIETARIO EN LA CONSAGRACIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1842-1868). ....**

**593**

<b>1. La construcción jurídica del Patrimonio Monumental como bien inherente al Estado en base a los derechos patrimoniales. ....</b>	<b>596</b>
<b>1.1. Derecho absoluto de la propiedad privada e interés nacional como principios informadores en la construcción del derecho del Patrimonio Monumental en la consagración del Estado Liberal. ....</b>	<b>598</b>
1.1.1. El derecho absoluto de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico en la etapa isabelina. ....	598
1.1.2. Hacia un intervencionismo estatal: las obras públicas como limitadores del derecho absoluto de la propiedad privada. ....	601
1.1.3. El principio de intervención estatal como fundamento ideológico de exaltación nacional en el Estado Isabelino. ....	604
<b>1.2. La reforma institucional del sistema administrativo del Patrimonio Monumental. ....</b>	<b>623</b>
1.2.1. Un primer ensayo institucional en la Década Moderada (1844-1854): Las Comisiones de Monumentos Históricos-Artísticos. ....	623
1.2.2. Una reforma institucional del Patrimonio Monumental en la etapa del Bienio Progresista (1854-1856): La Reorganización de las Comisiones de los Monumentos. ....	636
1.2.3. Un ensayo frustrado de la centralización administrativa de la tutela del Patrimonio Monumental en el periodo de la Unión Liberal (1856-1866). ....	638
<b>1.3. El régimen tutelar del Patrimonio Eclesiástico Monumental en el ámbito de los derechos patrimoniales en el periodo isabelino. ....</b>	<b>644</b>
1.3.1. Un ensayo frustrado de tutela del Patrimonio Conventual desamortizado como bienes nacionales. ....	645
1.3.1.1. Un nuevo capítulo de destrucción patrimonial del patrimonio conventual. ....	645
1.3.1.3. La cesión de los edificios religiosos desamortizados: Edificios Administrativos, Edificios de Cultos, Inmuebles de usos privados y Monumentos Nacionales. ....	647
- Los bienes conventuales como edificios administrativos. ....	647



- La transformación de los inmuebles conventuales desamortizados en cuarteles: La Real Orden de 12 de julio de 1846.....	652
- La designación de los conventos que pudieran ser aplicados al culto: La Real Orden de 30 de octubre de 1849 y la Circular del 14 de noviembre de 1849.....	653
- La suspensión de las ventas de los bienes inmuebles pertenecientes a cofradías y otras instituciones seculares.....	654
- La configuración de los bienes pertenecientes a Patronatos de los conventos suprimidos en dominio público: La Real Orden de 1º de diciembre de 1846.....	656
1.3.1.4. Un instrumento de tutela del patrimonio eclesiástico desamortizado por lo que quedaba exceptuado de venta: La Declaración de Monumentos Históricos.....	656
1.3.1.5. El destino de los bienes muebles conventuales de interés histórico y artístico: La institucionalización museística.....	659
<b>1.3.2. La génesis de la controversia entre la potestad civil y la potestad eclesiástica en la política de la restauración de los bienes inmuebles de propiedad eclesiástica.....</b>	<b>661</b>
1.3.2.1. Un ensayo de la política tutelar de la restauración inmobiliaria eclesiástica durante la Década Moderada: El decreto de 23 de mayo de 1845 y la Circular de 4 de diciembre de 1845.....	663
1.3.2.2. La impronta del Concordato de 16 de marzo de 1851 en la tutela pública del Patrimonio Eclesiástico Monumental: El Real decreto de 19 de septiembre de 1851.....	665
1.3.2.3. La asignación presupuestaria en la restauración de bienes inmuebles del Patrimonio Eclesiástico: Los arreglos parroquiales.....	667
1.3.2.4. La tutela de la restauración de los inmuebles religiosos monumentales durante la etapa de la Unión Liberal: La impronta del Convenio de 1859 y la promulgación del Real decreto de 4 de octubre de 1861.....	668
<b>1.3.3. Los límites del tráfico jurídico del Patrimonio Monumental de propiedad eclesiástica: El Real Decreto de 10 de abril de 1866.....</b>	<b>672</b>
<b>1.4. El Patrimonio Real Monumental como Patrimonio Nacional: La desvinculación de las colecciones reales de la Corona.....</b>	<b>674</b>
<b>1.4.1. Una primera vinculación del Patrimonio Monumental Regio a la Corona en la Década Moderada: El proyecto de decreto del 22 de noviembre de 1845 por el que vinculasen a la Corona los palacios reales, museos, sitios, posesiones, derechos y bienes estables que eran propiedad privada de Isabel II.....</b>	<b>674</b>
<b>1.4.2. La herencia de Doña María Cristina y el destino de algunos bienes históricos-artísticos no vinculados a la Corona.....</b>	<b>675</b>
<b>1.4.3. La desvinculación de las colecciones reales de la Corona durante la última etapa del periodo isabelino. La ley de 12 de mayo de 1865.....</b>	<b>676</b>
<b>1.5. El documento histórico como bien de interés general en la España Isabelina: La génesis del sistema archivístico público de interés histórico.....</b>	<b>678</b>
<b>1.5.1. Una incipiente tutela pública del Patrimonio Documental en la Década Moderada: La génesis de las Bibliotecas Públicas y el derecho de acceso a la información de los documentos históricos por parte de los particulares: La Real Orden de 20 de abril de 1844.....</b>	<b>678</b>
<b>1.5.2. Un nuevo ensayo de institucionalización administrativa del Patrimonio Documental durante la Unión Liberal: La creación del Archivo Central por el Real decreto de 17 de junio de 1858.....</b>	<b>680</b>
<b>1.5.3. La génesis del Archivo Histórico Nacional como reflejo del centralismo administrativo de la tutela del Patrimonio Documental: El Real Decreto del 28 de marzo de 1866.....</b>	<b>682</b>
<b>1.6. La delimitación del espacio público en la configuración de la ciudad y su impacto en la protección del patrimonio monumental: la génesis del Patrimonio Urbano Monumental.....</b>	<b>687</b>
<b>1.6.1. El debate urbanístico en torno a las transformaciones de la urbe tradicional y el nuevo modelo de ciudad burguesa, portadora de la idea de modernidad en la España de Isabel II: De la ciudad conventual a la ciudad liberal.....</b>	<b>687</b>
<b>1.6.2. Una incipiente administración de la tutela pública del Patrimonio Monumental Urbanístico.....</b>	<b>692</b>
1.6.2.1. Las Corporaciones Municipales: las Comisiones de Ornato y los Arquitectos Municipales.....	692
1.6.2.2. Un nuevo organismo del Patrimonio Urbanístico: La Junta Consultiva de Policía Urbana.....	695
1.6.2.3. Las nuevas atribuciones de los Arquitectos Municipales y su impronta en el Patrimonio Monumental Urbanístico: El Real decreto de 1º de diciembre de 1858.....	697
1.6.2.4. La pervivencia del papel tutelar de la Real Academia de San Fernando y la Real Academia de la Historia en el ámbito del Patrimonio Monumental Urbanístico.....	697
<b>1.6.3. Las transformaciones morfológicas y su impacto en el Patrimonio Monumental Urbanístico.....</b>	<b>698</b>
1.6.3.1. Las alineaciones y los ensanches. Los primeros instrumentos del derecho urbanístico y su impronta en el Patrimonio Monumental Urbano.....	699



- 1.6.3.2. La configuración de la plaza pública como nuevo escenario económico-social y las transformaciones del tejido urbano conventual en la España isabelina. La plaza del Sol. .... 703
- 1.6.3.3. El derribo de la muralla: la controversia entre los principios de ornato y salubridad e higiene en la España Isabelina. .... 706

## **2. Los límites de la intervención estatal en el ámbito del dominio privado del Patrimonio Monumental. .... 710**

### ***2.1. El deber de conservación de los propietarios de los bienes inmuebles de interés histórico-artístico en la España Isabelina: un primer ensayo de la intervención administrativa en el ámbito del derecho de la propiedad privada. .... 710***

#### ***2.1.1. Los límites del derecho de los propietarios privados de los inmuebles de interés histórico y artístico en la legislación urbanística isabelina. .... 711***

#### ***2.1.2. Un primer ensayo de la intervención administrativa en el ámbito del derecho de la propiedad privada. .... 713***

### ***2.2. Los límites del tráfico de obras de arte en la incipiente mercantilización de los bienes de interés histórico y artístico. .... 716***

#### ***2.2.1. El triunfo del coleccionismo burgués en la España Isabelina. .... 716***

#### ***2.2.2. Las disposiciones legales sobre tráfico de obras de arte en la España isabelina: Las Reales ordenes de 24 de mayo de 1849, 6 de mayo de 1851, 14 de agosto de 1856 y 6 de junio de 1865. 721***

#### ***2.2.3. La adquisición de obras de arte por el Estado. Real orden del 10 de febrero de 1864 estableciendo las reglas y trámites que han de seguirse para la adquisición por el Estado de obras científicas, literarias y artísticas. .... 722***

### ***2.3. Una frustrada regulación de la tutela pública de las excavaciones arqueológicas: La impronta del derecho de la propiedad privada en el ámbito del sistema normativo del Patrimonio Arqueológico. .... 722***

#### ***2.3.1. Un ensayo frustrado del modelo institucional del Patrimonio Arqueológico. .... 722***

##### ***2.3.1.1. El papel trascendental de la Real Academia de la Historia como Inspector de antigüedades. El Real decreto de 1º de mayo de 1850 por el que se reforman los Estatutos: Los Correspondientes de la Real Academia de la Historia. .... 723***

##### ***2.3.1.2. Las atribuciones de las Comisiones Provinciales en materia arqueológica y su impronta en el derecho de la propiedad privada. .... 725***

##### ***2.3.1.3. Los inspectores de Antigüedades. .... 726***

##### ***2.3.1.4. El deber de las Corporaciones Municipales de conservar las antigüedades descubiertas en sus localidades. .... 729***

##### ***2.3.1.5. La Sociedad Arqueológica Española. .... 733***

##### ***2.3.1.6. La intervención de las instituciones privadas en el ámbito de la protección del Patrimonio Arqueológico: La Sociedades Amigos del País y Ateneos. .... 736***

#### ***2.3.2. La preeminencia del derecho de la propiedad privada sobre la tutela pública de los hallazgos arqueológicos en dominio privado: La pervivencia de la Real Cédula de 1803. .... 737***

##### ***2.3.2.1. El caso de enajenación de obras de antigüedad en dominio particular: el Tesoro de Guarrazar. 737***

##### ***2.3.2.2. La adquisición de la Real Academia de la Historia de bienes arqueológico de dominio privado: El disco de Teodosio. .... 742***

##### ***2.3.2.3. El derecho de adquisición de los descubridores y propietarios particulares: El caso de la adquisición de las momias de Canarias. .... 743***

#### ***2.3.3. La adquisición del Estado de los bienes arqueológicos descubiertos en dominio público. 747***

##### ***2.3.3.1. El Dictamen de la Comisión de la Real Academia de la Historia del 27 de mayo de 1858 no autorizando la adquisición de bienes arqueológicos como propiedad particular e instando a resolverlo la promulgación de una ley de antigüedades. .... 747***

##### ***2.3.3.2. Los frustrados proyectos de ley. .... 750***

#### ***2.3.4. La impronta del sistema normativo sectorial en la configuración del ordenamiento jurídico del Patrimonio Monumental. .... 753***

##### ***2.3.4.1. La adquisición de terrenos de fundos privados por el Estado para realizar excavaciones arqueológicas: La frustrada aplicación de la ley de 17 de julio de 1836. El caso de Numancia. 753***

##### ***2.3.4.2. La impronta de la Ley de Minas de 14 de diciembre de 1855 y el Reglamento 6 de julio de 1859 en la configuración del sistema normativo del patrimonio arqueológico. .... 755***

#### ***2.3.5. Obras Públicas y Patrimonio Arqueológico: Hacia una tutela de los bienes arqueológicos descubiertos en las obras públicas. .... 756***

#### ***2.3.6. La concesión de asignación presupuestaria del Ministerio de Instrucción Pública a la Real Academia de la Historia para realizar excavaciones arqueológicas. .... 759***

2.3.7. <i>La institucionalización del coleccionismo público del Patrimonio Arqueológico: la fundación del Museo Arqueológico Nacional y los museos provinciales arqueológicos</i> .....	761
<b>2.4. El sistema sancionador de los delitos contra la Propiedad Monumental en la España Isabelina: el Código Penal de 1848</b> .....	<b>767</b>
2.4.1. <i>La tipificación del delito contra el Patrimonio Arqueológico en el Código Penal de 1848</i> .....	767
2.4.2. <i>Una sentencia judicial limitando el derecho de la propiedad privada de los bienes arqueológicos: La sentencia de 1846</i> .....	768

## **CAPÍTULO V. LA INCLUSIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN PÚBLICA COMO LIMITADOR DEL DERECHO ABSOLUTO DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU PROYECCIÓN EN LA TUTELA DEL PATRIMONIO MONUMENTAL EN LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DEL ESTADO LIBERAL**..... 771

### **1. Un nuevo modelo de Estado Tutelar: El arte al servicio de los ciudadanos**..... 773

#### **1.1. El arte al servicio del pueblo: una nueva concienciación pública del Patrimonio Monumental**..... 773

#### **1.2. Un ensayo renovador del modelo administrativo tutelar del Patrimonio Monumental durante el Sexenio Revolucionario**..... 776

##### **1.2.1. El debate jurídico de la propiedad eclesiástica del Sexenio Democrático (1868-1874)**.....780

- 1.2.1.1. Un nuevo capítulo de incautación de los bienes eclesiásticos durante la Revolución de 1868.....780
- 1.2.1.2. El Gobierno de Amadeo de Saboya (enero 1871-febrero 1873)..... 782
- 1.2.1.3. I República (febrero 1873-enero 1874)..... 784

##### **1.2.2. La política urbanística de las Juntas Revolucionarias y la destrucción del Patrimonio Eclesiástico Monumental**.....785

- 1.2.2.1. El debate urbanístico en el ámbito del sexenio revolucionario: El desmantelamiento de la ciudad conventual a través de la política de derribos por parte de las Corporaciones Municipales.... 785
- 1.2.2.2. Una leve respuesta legal a las demoliciones de conventos por parte de las Juntas Revolucionarias: El Decreto del 21 de octubre de 1868..... 800
- 1.2.2.3. El papel de Reales Academias y las Comisiones Provinciales de Monumentos en la tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico desamortizado..... 800

##### **1.2.3. Una incipiente tutela pública del Gobierno Provisional**.....803

- 1.2.3.1. Las disposiciones legales sobre los edificios cedidos para uso público: La Orden de 9 de junio de 1869 y la Instrucción de 11 de mayo de 1870..... 803
- 1.2.3.2. El proceso de secularización de la riqueza artística: La incautación de los bienes religiosos de interés histórico y artístico por el Decreto del 1 de enero de 1869..... 804

##### **1.2.4. La suspensión de las ventas de bienes inmuebles eclesiásticos durante el Gobierno de Amadeo de Saboya (enero 1871-febrero 1873)**.....812

##### **1.2.5. Las medidas proteccionistas de los bienes inmuebles eclesiásticos de interés histórico y artístico de la I República**.....813

- 1.2.5.1. La restauración de los edificios religiosos en manos del Estado: La ley de 9 de mayo de 1873..... 813
- 1.2.5.2. La tutela del Gobierno Republicano sobre las Corporaciones Municipales en el ámbito de la conservación del Patrimonio Monumental Eclesiástico: El Decreto del 16 de diciembre de 1873..... 814

### **1.3. La transformación jurídica del Patrimonio Real Monumental en bien de dominio público durante el Sexenio Revolucionario**..... 818

#### **1.3.1. La desvinculación del Patrimonio Monumental Monárquico del dominio privado de la Corona y su función como uso y servicio de la Corona en la etapa del Gobierno Provisional: La ley de 9 de diciembre de 1869**.....819

#### **1.3.2. Las disposiciones legales del Gobierno de la I República sobre el destino de los bienes del Patrimonio de la Corona**.....822

1.3.2.1. Los decretos de 15 de abril y 25 de junio de 1873 sobre el destino de los Archivos pertenecientes a la Corona. ....	822
1.3.2.2. La incautación de los bienes que habían pertenecido a la Corona: Ley del 24 de 1873, disponiendo que el Ministro de Hacienda se incaute de todos los bienes que pertenecieron a la Corona.....	823
<b>1.3.3. La protección pública de la Alhambra como bien de interés histórico-artístico en el proceso de desvinculación y venta de los bienes que constituía el Patrimonio Monumental de la Corona a raíz de la ley de 9 de diciembre de 1869. ....</b>	<b>823</b>
<b>1.3.4. La transformación jurídica del Monasterio de El Escorial como bien de interés público durante el Sexenio Revolucionario.....</b>	<b>826</b>
<b>1.3.5. La impronta de la ley de 1869 sobre el coleccionismo público en la I República: La concepción del Museo de Prado como Museo Público. ....</b>	<b>828</b>
<b>1.4. La tutela pública del Estado sobre el Patrimonio Monumental Municipal. 831</b>	
1.4.1. La tutela públicas de las construcciones civiles en el Sexenio Revolucionario.....	831
1.4.2. La demolición de los arcos y puertas urbanas por declaración de ruina. ....	834
<b>2. Una incipiente tutela pública del Patrimonio Monumental en el régimen de Alfonso XII (1874-1885).....</b>	<b>836</b>
<b>2.1. La quiebra del derecho absoluto de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico español en el régimen de Alfonso XII: el inicio de la crisis del Estado Liberal. (1874-1885).....</b>	<b>839</b>
<b>2.2. Una modernización del sistema administrativo del Patrimonio Monumental en la España de Alfonso XII. ....</b>	<b>845</b>
2.2.1. La potestad administrativa de las Comisiones de Monumentos en la tutela pública del Patrimonio Monumental: La Real orden de 30 de diciembre de 1881, la Real orden de 8 de enero de 1882 se deroga la del 11 de junio de 1867 y la Real orden de 24 de abril de 1883 por el que se establece que los Museos provinciales sean tutelados por las Comisiones Provinciales de Monumentos.....	846
2.2.2. La intensificación del papel de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes. ....	848
2.2.3. El papel tutelar de la Junta Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades.....	849
<b>2.3. Un Proyecto de ley del Patrimonio Monumental elaborado por la Comisión de Monumentos de Sevilla, redactado por Demetrio de los Ríos en 1876. ....</b>	<b>852</b>
<b>2.4. Derecho de la propiedad eclesiástica e intervención administrativa en la tutela del Patrimonio Monumental durante el reinado de Alfonso XII.....</b>	<b>854</b>
2.4.1. El debate doctrinal en torno a la propiedad de los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico: Las tesis de Turbino sobre el derecho de la Iglesia a la adquisición de bienes. ....	855
2.4.2. La devolución de los bienes eclesiásticos y su impronta en la tutela del Patrimonio Monumental. ....	856
2.4.3. Un intento de regulación de la restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico: Las controversias entre las atribuciones de las Comisiones de Monumentos y las Juntas Diocesanas de Reparación de templos.....	860
2.4.3.1. Un intento de regulación de la Restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico: El Real decreto de 13 de agosto de 1876 y la Instrucción de 1877.....	860
2.4.3.2. El debate jurídico sobre la restauración de la Catedral de León: El conflicto entre la potestad pública y eclesiástica en torno a la propiedad eclesiástica monumental.....	864
2.4.3.3. Las controversias entre las atribuciones de las Comisiones de Monumentos y las Juntas Diocesanas de Reparación de templos: las dificultades de ejecución de los Reales Decretos de 13 de agosto de 1876 y 23 de abril de 1882 y el Reglamento de 1865. ....	867
2.4.4. La asignación de Presupuesto Público en la tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico.....	869
2.4.5. El Informe de la Academia sobre el proceso de secularización del Patrimonio Eclesiástico Monumental: Un intento de promulgación de una ley de propiedad artística de los bienes eclesiásticos. La Real Orden Circular de 29 de octubre de 1879. ....	870
2.4.6. La tutela pública sobre los bienes de interés histórico y artístico pertenecientes a a los Patronatos Religiosos.....	871

<i>2.5. La ambigua categorización de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico como Monumento Nacional Histórico y Artístico y Monumento Nacional durante el periodo de Alfonso XII.</i>	873
<i>2.5.1. Un incipiente procedimiento administrativo.</i>	877
<i>2.5.2. La exclusión de la venta y la conservación como potestad pública del Estado sobre los Bienes declarados Monumentos Nacionales, independiente de su régimen patrimonial.</i>	878
<i>2.5.3. La defensa del derecho de la propiedad privada como obstáculo en la declaración del Monumento Nacional.</i>	879
<i>2.5.4. La cesión de los bienes declarados Monumento Nacional a instituciones públicas y privadas por utilidad pública.</i>	881
<i>2.5.5. Las disposiciones legales sobre construcción, reparación y venta de edificios públicos, para todos los servicios de la Administración del Estado, que en su mayoría fueron edificios desamortizados en la España de la Restauración. La tutela especial a los bienes inmuebles declarados Monumentos Nacionales.</i>	882
<b>2.6. El aparente deber de conservación de las Corporaciones Municipales de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico.</b>	<b>885</b>
<i>2.6.1. Los conflictos entre los principios de modernidad urbanística y conservacionismo, reflejo de la contraposición entre los intereses públicos y privados.</i>	885
<i>2.6.2. Una escasa regulación de la tutela municipal sobre el Patrimonio Monumental.</i>	886
- La pervivencia del Real Decreto de 16 de diciembre de 1873 sobre conservación de bienes inmuebles de interés histórico y artístico: La paralización del derribo del Arco de San Lorenzo de Jaén.	887
- La impronta de la Real orden del 13 de abril de 1877 reguladora de las obras públicas en la tutela de los bienes declarados Monumentos históricos y artísticos.	888
- El deber de conservación de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico en los planes de ensanche aprobados por las Corporaciones Municipales: El Reglamento del 19 de febrero de 1877 y el Real Decreto de 12 de marzo de 1878.	889
<i>2.6.3. Las controversias entre las Corporaciones Municipales y el Estado en la tutela del Patrimonio Monumental.</i>	889
- La autorización de los derribos de bienes de interés histórico y artístico por parte de las Corporaciones Municipales: El caso del Arco de Bibarrambla de Granada.	889
- El conflicto de titularidad pública entre el Estado y el Municipio en la demolición de las murallas de los centros urbanos. El cambio de dominio a favor de la titularidad pública del Estado y su consiguiente declaración como Monumento Nacional: El caso de las murallas de Tarragona.	891
<b>2.7. La encrucijada de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico en la España de Alfonso XII: los límites del derecho de la propiedad privada y el intervencionismo del Estado.</b>	<b>893</b>
<i>2.7.1. Una reivindicación a la intervención del Estado en el derecho de la propiedad privada: La concepción pública del Patrimonio Arqueológica en la obra de Demetrio de los Ríos.</i>	893
<i>2.7.2. La autorización de las excavaciones arqueológicas de los particulares.</i>	895
<i>2.7.3. La regulación de las excavaciones arqueológicas por las Sociedades de Excursionistas y las Sociedades Arqueológicas.</i>	896
<b>2.8. Un régimen jurídico de aduanas en la exportación e importación de obras de artes como única tutela del tráfico comercial del Patrimonio Monumental.</b>	<b>900</b>
- La tutela pública del Patrimonio de la Corona.	900
<b>3. Una incipiente intervención en la tutela del Patrimonio Monumental en la Regencia de María Cristina (1885-1902).</b>	<b>902</b>
<i>3.1. La crisis del 98 y el revisionismo de la identidad nacional como fundamento de una nueva revisión del Patrimonio Nacional como bien de interés público.</i>	902
<i>3.2. La carencia de una regulación jurídica del patrimonio monumental eclesiástico durante la regencia de María Cristina (1886-1905).</i>	904
<i>3.2.1. La pervivencia de la Real Orden de 10 de abril de 1866.</i>	905
<i>3.2.2. Una iniciativa tutelar de la Iglesia Católica a principios del siglo XX: La configuración de los Museos Episcopales.</i>	906
<i>3.2.3. La restauración de bienes inmuebles religiosos de interés histórico y artístico.</i>	909

3.2.4. <i>Un conflicto tutelar entre el Estado y la Iglesia: La tutela de la sinagoga de Córdoba.</i>	910
<b>3.3. Una aproximación del significado jurídico de la declaración del Monumento Histórico y Artístico en la etapa de la Regencia.</b>	<b>912</b>
3.3.1. <i>Una discutida selección de bienes: las críticas de Rodrigo Amador de los Ríos al sistema administrativo de declaración de Monumentos Nacionales.</i>	914
3.3.2. <i>El interés histórico y artístico como fundamento jurídico tutelar del Patrimonio Monumental: Una relectura del nacionalismo español en la etapa de la Regencia.</i>	917
3.3.3. <i>El régimen jurídico en el ámbito de los derechos patrimoniales. Los monumentos nacionales como bienes públicos.</i>	919
- La cesión de inmuebles en usufructos a las comunidades religiosas.	919
- El cambio de uso público de un bien inmueble declarado Monumento Nacional.	920
- Los límites de la cesión de inmuebles propiedad del Estado para uso público y su proyección en los bienes de interés histórico y artístico: El Real decreto de 9 de abril de 1896.	920
- La inspección de las Comisiones de Monumentos de los bienes inmuebles declarados Monumentos Nacionales Histórico-Artístico: La aplicación del artículo 21 del Reglamento de 1865 en relación a la tutela del Patrimonio Monumental.	921
- La tutela de los edificios civiles durante la Regencia de María Cristina y su impronta en el Patrimonio Monumental: El Real decreto de 15 de enero de 1886.	922
- La adquisición de inmuebles de interés histórico y artístico a los particulares por el Estado como tutela pública del Patrimonio Monumental: La adquisición de los restos del templo de San Isidoro en Avila y su traslado a Madrid.	925
<b>3.4. Los conflictos competenciales entre las Reales Academias de las Bellas Artes de San Fernando y de la Historia y las Corporaciones Municipales en el deber de conservación del Patrimonio Monumental.</b>	<b>925</b>
3.4.1. <i>El impedimento del derribo de la torre de Santa Clara de Zamora por parte de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.</i>	925
3.4.2. <i>La impronta de las Reales Academias de Bellas Artes en las disposiciones municipales sobre la restauración monumental: El papel de la Real Academia de San Carlos en la restauración de las torres Serrano de Valencia.</i>	927
<b>3.5. Una ineficaz regulación normativa sobre excavaciones arqueológicas en el periodo de la Regencia: La regulación jurídica en función al dominio del fundo a excavar.</b>	<b>928</b>
3.5.1. <i>La necesidad de una Ley de Antigüedades: Una pretensión defendida por la erudición española.</i>	928
3.5.2. <i>La impronta del Código Civil de 1889 en la tutela pública del Patrimonio Arqueológico.</i>	930
3.5.3. <i>La impronta de la legislación minera en el ámbito de la regulación de las excavaciones arqueológicas.</i>	931
3.5.4. <i>Las excavaciones de Numancia como ensayo de la potestad del Estado de expropiación por declaración de utilidad pública en los terrenos privados que contuviese objetos arqueológicos: El Informe de la Real Academia de la Historia de 1896.</i>	933
3.5.5. <i>La pervivencia del derecho de los propietarios privados a hacer excavaciones arqueológicas en sus fundos sin limitación de la potestad pública: La cuestión jurídica en torno al descubrimiento y adquisición extranjera de la Dama de Elche.</i>	935
<b>4. El epílogo de una etapa: La intervención administrativa en la tutela del Patrimonio Monumental en el último gobierno liberal de Sagasta, durante los Ministerios de García Alix (1900-1901) y el conde de Romanones. (1901-1902).</b>	<b>939</b>
4.1. <i>Una modernización del sistema administrativo del Patrimonio Monumental.</i>	939
4.2. <i>La catalogación de los bienes histórico-artístico: Un ensayo de la sistematización científica del patrimonio monumental desde la tutela pública.</i>	941
4.3. <i>El proyecto de Ley de 11 de diciembre de 1900 de Antonio García Alix: Un primer ensayo de tutela pública sobre la regulación del comercio de bienes de interés histórico y artístico, tanto público como privado.</i>	946



4.3.1. La conceptualización de las Antigüedades.....	947
4.3.2. El deber de conservación y divulgación del Patrimonio Monumental.....	948
4.3.3. El Registro de la propiedad artístico-arqueológico.....	948
4.3.4. Los límites de la exportación de las obras de arte y antigüedades.....	949
4.3.5. Los límites de la restauración del inmueble de interés histórico y artístico del propietario particular.....	950
<b>4.4. La génesis de los servicios públicos de índole cultural; El régimen jurídico de los Archivos Públicos y Museos Públicos. ....</b>	<b>950</b>
4.4.1. La tutela pública del Patrimonio Documental: La consagración de los Archivos como Servicios Públicos. ....	950
4.4.2. La configuración definitiva del Museo Público en la España de la Regencia de María Cristina. ....	952
4.4.2.1. Un precedente de regulación del museo público: la Real orden de 7 de febrero de 1890 por el que el Estado dispone la adquisición de obras de arte para los museos públicos y el Real decreto de 4 de agosto de 1895 por el que se dispone la adquisición de obras de arte contemporáneo por el Estado, dando origen al Museo del Arte contemporáneo en Madrid. ....	953
4.4.2.2. La prohibición de préstamo de obras artísticas pertenecientes a Museos de Bellas Artes y Arqueológicos a exposiciones extranjeras: La Real orden de 19 de agosto de 1901. ....	957
4.4.2.3. La traslación de los cuadros de la Real Academia de San Fernando al Museo Nacional en depósito: un problema de derecho de propiedad monumental entre el Estado y las Corporaciones Públicas: la promulgación del Real decreto de 12 de septiembre de 1901.....	958
4.4.2.4. La divulgación pública del Museo Nacional: El real decreto de 7 de septiembre de 1901. ....	959
4.4.2.5. La institucionalización administrativa de los Museos Públicos: la promulgación del Real Decreto del 29 de noviembre de 1901 por el que se aprobaba el Reglamento para el régimen de los museos regidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueológicos. ....	960
4.4.2.6. Un proyecto de adquisición de bienes artísticos por parte del Estado para el Museo del Prado: La propuesta de derecho de retracto del Marqués de Montesa en el Congreso de Diputados en 1902. ....	961
4.4.2.7. El destino de los bienes arqueológicos de excavaciones arqueológicas. El Real decreto de 29 de noviembre de 1901 por el que se aprueba el Reglamento para el régimen de los Museos Arqueológicos del Estado. ....	962

## **CAPITULO VI: LA REGULACIÓN JURIDICA DEL PATRIMONIO MONUMENTAL EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DEL REGENERACIONISMO: UNA NUEVA POLÍTICA DE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL PATRIMONIO MONUMENTAL. ....**

**964**

### **1. La construcción del Patrimonio Monumental como bien de interés público en la etapa del Regeneracionismo. ....**

**965**

#### **1.1 La incipiente función social de la propiedad en la España de Alfonso XIII: Un equilibrio moderado entre el derecho de la propiedad privada y los intereses generales. ....**

**966**

#### **1.2. Una nueva concepción pública del Patrimonio Monumental como objeto tutelar del Estado.....**

**973**

##### **1.2.1. El arte al servicio del Estado. ....**

**973**

##### **1.2.2. La quiebra del concepto jurídico del Patrimonio Monumental como bien inherente al propietario en la España de Alfonso XIII. ....**

**973**

##### **1.2.3. Una nueva mirada del patrimonio monumental en la doctrina jurídica: Las tesis de Ramón Rodríguez Pascual. ....**

**975**

##### **1.2.4.2. La construcción de un Derecho Público del Patrimonio Monumental en la etapa del Regeneracionismo. ....**

**978**

### **2. Un nuevo marco administrativo de la tutela pública del Patrimonio Monumental en la España de Alfonso XIII. ....**

**980**

#### **2.1. La Comisión General de Bellas Artes y Monumentos.....**

**980**

#### **2.2. La inspección de obra de arte. ....**

**984**

#### **2.3. El Real Decreto de 10 de octubre de 1919: La creación de los Delegados Regios. ....**

**985**



<b>2.4. El Patrimonio Monumental como Patrimonio Turístico en la España de los primeros decenios del siglo XX: El Delegado Regio de Turismo.....</b>	<b>986</b>
<b>2.5. La acción proteccionista de la Mancomunidad de Cataluña: Una administración vanguardista del Patrimonio Monumental en el marco hispano. ....</b>	<b>988</b>
2.5.1. <i>El debate institucional sobre la conservación de las pinturas murales de las iglesias románicas de Cataluña. ....</i>	988
2.5.2. <i>Un ensayo institucional de la tutela del Patrimonio Monumental en Cataluña. ....</i>	989
<b>2.6. La protección de las antigüedades en el Protectorado de Marruecos. ....</b>	<b>990</b>
<b>3. Los proyectos de Ley de exportación de bienes históricos y artísticos: un inicio frustrado a los límites del carácter absoluto de la propiedad privada de los bienes de interés histórico y artístico. ....</b>	<b>991</b>
3.1. <i>La interpelación del senador Casa Vieja en el Senado sobre la necesidad de regular una ley sobre exportación de obras de arte siguiendo el modelo de la ley italiana de 1902 (1903). ....</i>	992
3.2. <i>Los expolios de las obras de El Greco de la Catedral de Valladolid y una frustrada respuesta legal: El proyecto de ley de 1904 de exportación de obras de arte de Domínguez Pascual. ....</i>	993
3.2.1. <i>Los expolios de las obras de El Greco de la Catedral de Valladolid. ....</i>	993
3.2.2. <i>El proyecto de Ley de Lorenzo Domínguez Pascual en 1904: La defensa de los límites del derecho de disposición de los propietarios de bienes artísticos y arqueológicos.....</i>	996
3.3. <i>Un nuevo proyecto de Ley de exportación de obras de arte: El proyecto del Conde de Casa-Valencia de 1905-1906. ....</i>	1001
3.4. <i>Una discusión en las Cortes sobre tutela pública del Patrimonio Monumental en 1907: la salida de obras de El Greco al extranjero y la necesidad de promulgar una nueva ley de exportación de obras de arte. ....</i>	1009
3.5. <i>Un artículo de la revista Forma de 1907, reclamando una ley de exportaciones. ....</i>	1027
3.6. <i>El Proyecto de Real decreto de 22 de enero de 1908 de Rodríguez San Pedro: la impronta de la ley italiana de 12 de junio de 1902.....</i>	1028
3.7. <i>La reiteración del debate sobre la exportación de la obras de arte en las sesiones de Cortes a finales de 1910. ....</i>	1032
<b>4. Los límites de la potestad pública sobre los bienes religiosos de interés histórico y artístico. ....</b>	<b>1033</b>
4.1. <i>Las carencias de la regulación de exportación de los bienes del Patrimonio Eclesiástico Monumental. ....</i>	1034
4.1.1. <i>Una nueva disposición legal sobre la venta de bienes eclesiásticos de interés histórico-artístico: El proyecto Jimeno de 13 de septiembre de 1906 y la pervivencia de la Real Orden de 10 de abril de 1866. ....</i>	1035
4.1.2. <i>Un caso de limitación de enajenación de obras religiosas de interés histórica y artística: la enajenación de la Arqueta de Zamora por el Cabildo Catedralicio.....</i>	1036
4.1.3. <i>Los límites del derecho de disposición de los bienes de interés histórico y artístico de los Patronatos Eclesiásticos.....</i>	1043
- La interpelación de Elías Tormo sobre la enajenación de bienes religiosos de interés histórico y artístico bajo la jurisdicción del Patronato Real.....	1043
- La prohibición de exportación de los bienes artísticos de las Fundaciones de Beneficencia: El Real decreto de 16 de julio de 1910.....	1044
- La venta del cuadro de la Adoración de los Reyes de Van der Goes, propiedad del la Fundación Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, Monforte (León), como objeto de polémica en los debates parlamentarios sobre exportación de bienes de interés histórico y artístico. ....	1046
- La autorización a los Patronatos de la Fundación para vender objetos artísticos. ....	1054

4.1.4. <i>La regulación eclesiástica de la venta de bienes religiosos de interés histórico-artístico.</i>	
1054	
4.2. <i>La cesión del Estado de los antiguos conventos desamortizados a los ayuntamientos para uso público.</i>	1057
4.3. <i>Los límites de la restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico: La reiteración del conflicto Estado-Iglesia.</i>	1058
4.3.1. <i>El Real decreto de 19 de abril de 1915 relativo a la construcción y reparación de templos y demás edificios eclesiásticos.</i>	1058
4.3.2. <i>El Real decreto de 30 de abril de 1918 sobre restauración de templos y otros edificios religiosos.</i>	1062
5. <i>La protección jurídica y administrativa del Patrimonio Arqueológico Español a principios del siglo XX. La Ley de 1911 y el Reglamento de 1912.</i>	1063
5.1. <i>Una nueva concienciación pública del Patrimonio Arqueológico.</i>	1064
5.1.1. <i>La pérdida del Patrimonio Arqueológico: una realidad social de la España de principio del siglo XX.</i>	1064
5.1.2. <i>La génesis de la Arqueología científica española.</i>	1066
- El arqueólogo frente al anticuario.	1066
- La delimitación entre los bienes artísticos y bienes arqueológicos. La separación entre la Arqueología y la Historia del arte.	1067
- La institucionalización pública de la arqueología científica a comienzo del siglo XX.	1069
- La presencia de arqueólogos extranjeros en España.	1072
5.2. <i>El proceso de configuración de la ley arqueológica.</i>	1074
5.2.1. <i>La necesidad de una ley.</i>	1074
5.2.2. <i>El proyecto de ley de 2 de junio de 1911 presentado en el Senado por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Amalio Gimeno, estableciendo las reglas a que han de someterse las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de las ruinas y antigüedades.</i>	1075
5.2.3. <i>Las enmiendas al proyecto de Ley presentado por el Marqués de Cerralbo y Cortazar.</i>	1077
5.2.4. <i>El debate parlamentario en torno a la aprobación de la ley de antigüedades: el conflicto institucional entre el derecho absoluto de la propiedad de los bienes arqueológicos y los intereses generales.</i>	1079
5.3. <i>El triunfo del intervencionismo público en el seno de las excavaciones arqueológicas: El análisis de la ley.</i>	1088
5.3.1. <i>Un intento de responder jurídicamente al concepto de los bienes arqueológicos y las excavaciones arqueológicas.</i>	1089
5.3.2. <i>Un nuevo marco administrativo: La creación de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.</i>	1091
5.3.3. <i>La autorización administrativa como potestad pública del Estado en las excavaciones arqueológicas.</i>	1093
- Autorización a los investigadores extranjeros.	1097
- Autorización de excavaciones arqueológicas en fondos privados del propio investigador.	1098
- Autorización a las Corporaciones Públicas.	1098
- Nombramiento de un Delegado Inspector Técnico para que inspeccione y asesore las excavaciones arqueológicas.	1098
- Autorización de cesiones de excavaciones arqueológicas a investigadores por renuncia del que había sido a su vez autorizado.	1099
- Autorización de excavaciones arqueológicas en fondos privados del propio investigador.	1100
- Las obligaciones de los concesionarios de excavaciones arqueológicas.	1100
- Respeto del dominio particular donde se iba a realizar la excavación arqueológica.	1101
5.3.4. <i>La potestad del Estado en realizar excavaciones en dominio privado: El expediente de utilidad pública conforme a la ley de 1911 de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Estado.</i>	1102
- La Real orden de 15 de febrero de 1923 por el que se dispone que por cuenta del Estado se practiquen excavaciones arqueológicas en la loma de "La Alcudia", en Elche (Alicante).	1102

- La Declaración de utilidad pública de las excavaciones realizadas en Punta de Vaca (Cádiz) por la Real Orden de 30 de abril de 1914. ....	1103
- Las excavaciones de la Necrópolis Púnica de Ebusus: Una nueva aplicación de declaración de utilidad pública sobre excavaciones arqueológicas en base a la ley de 30 de abril de 1914. ....	1108
- La Declaración de utilidad pública para llevar a cabo las excavaciones arqueológicas en Medina Azahara: La Real orden de 2 de diciembre de 1914. ....	1109
- El caso de la expropiación forzosa fundamentada en la Ley de 1911 en Numancia, Mérida e Itálica. ....	1112
<b>5.3.5. El Estado adquirente de los bienes arqueológicos en el ámbito de las excavaciones arqueológicas. ....</b>	<b>1117</b>
- La adquisición de obras arqueológicas por el Estado por descubrimiento fortuito y la recompensa del descubridor en virtud de la ley de 1911: El caso del tesoro de Aliseda. ....	1117
- El derecho de tanteo y retracto. ....	1120
- La concesión del dominio de los bienes descubiertos por las Corporaciones Públicas e investigadores privados, públicos y extranjeros. ....	1126
- Respeto al estado de dominio de los propietarios, con los límites del derecho de tanteo y retracto por parte del Estado. ....	1127
<b>5.3.6. Los límites de disposición de la propiedad privada de los bienes privados. ....</b>	<b>1128</b>
- El caso de la adquisición de los mosaicos de Itálica por Doña Regla Manjón, condesa de Lebrija. ....	1130
- El caso de los exvotos de Castellar y Despeñaperros. ....	1133
<b>5.3.7. El procedimiento sancionador. ....</b>	<b>1134</b>
<b>5.3.8. La confección de un Inventario. ....</b>	<b>1135</b>
<b>5.3.9. La aplicación del presupuesto público en las excavaciones arqueológicas. Los premios en metálico. ....</b>	<b>1135</b>
<b>6. La construcción jurídica del Patrimonio Inmobiliario de interés histórico y artístico como bien de interés público: Monumento Nacional y Monumento Nacional Arquitectónico y Artístico. ....</b>	<b>1136</b>
<b>6.1. El despertar de la conciencia patrimonial del Patrimonio Inmobiliario de interés histórico y artístico. ....</b>	<b>1136</b>
<b>6.1.1. La enajenación del Patrimonio Inmueble Monumental a principios del siglo XX: Un supuesto derecho inherente al propietario. ....</b>	<b>1136</b>
<b>6.1.2. La actitud crítica de los arquitectos ante la conservación de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico. ....</b>	<b>1137</b>
- La revista Arquitectura como defensa del Patrimonio Monumental a principios del siglo XX. Torres Balbas. ....	1137
- La conferencia de 1919 del arquitecto Jerónimo Martorell en el Ateneo de Madrid. ....	1139
- Los Congresos de Arquitectura. ....	1140
<b>6.2. La pervivencia de la Declaración de Monumento Nacional a principio del siglo XX como instrumento tutelar administrativo del Patrimonio Inmobiliario Monumental. ....</b>	<b>1142</b>
<b>6.2.1. La inoperancia de la declaración de Monumento Nacional como instrumento tutelar del Patrimonio Monumental Inmueble. ....</b>	<b>1142</b>
<b>6.2.9. La obligación de conservar el Monumento Nacional, incluso en aquellas partes que hubieran sido adquiridas por el dominio privado. ....</b>	<b>1166</b>
<b>6.3. Una nueva figura jurídica: Los Monumentos Nacionales Arquitectónicos Artísticos. La ley del 4 de marzo de 1915. ....</b>	<b>1167</b>
<b>6.3.1. El proceso de la aprobación de la ley. ....</b>	<b>1169</b>
<b>6.3.2. Un nuevo bien jurídico: El Monumento Arquitectónico Artístico. ....</b>	<b>1171</b>
<b>6.3.3. La intervención de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en los expedientes de incoación sobre la declaración de Monumento arquitectónicos-artísticos. ....</b>	<b>1177</b>
<b>6.3.4. Los límites del derecho del propietario de bienes inmuebles declarado Monumento Arquitecto Artístico. ....</b>	<b>1179</b>
- Solicitud de autorización pública para el derribo de los bienes inmuebles: la distinción jurídica entre derribo y deterioro intencionado. ....	1180
- La acción del derecho de tanteo y retracto por parte del Estado y los conflictos de dominio del inmueble: El caso del Hospicio de Madrid. ....	1180

- La adquisición de dominio por parte del Estado en los inmuebles declarados Monumentos arquitectónicos-artísticos: La Inscripción en el Registro de Propiedad como anotación marginal. ....	1183
- Prohibición de exportar bienes de carácter histórico-artístico. ....	1184
- Medidas de Fomento. ....	1184
- La cesión de bienes inmuebles de interés histórico y artístico del Estado a las Corporaciones Públicas. ....	1185
<b>6.4. Un ensayo en la configuración de una institucionalización administrativa de tutela de Bienes Inmuebles declarados Monumentos Nacionales. ....</b>	<b>1185</b>
<b>6.4.1. Una reorganización del institucionalismo administrativo: Las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando y la Comisión de Monumentos. ....</b>	<b>1185</b>
- El Reglamento de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos de 14 de agosto de 1918. ....	1185
<b>6.4.2. Los conservadores de monumentos nacionales. ....</b>	<b>1191</b>
<b>6.4.3. La reforma del Servicio de Construcciones Civiles, encargado de la restauración y conservación de los Monumentos Nacionales, a raíz del Real decreto de 16 de junio de 1905: La creación de los Inspectores Generales de obras artísticas. ....</b>	<b>1193</b>
<b>6.5. Un caso excepcional de tutela pública del Patrimonio Monumental: La gestión institucional de la Alhambra. ....</b>	<b>1198</b>
<b>6.5.1. La Comisión Especial de la Alhambra como primera institución pública administrativa y su política de adquisición de bienes inmuebles. ....</b>	<b>1200</b>
<b>6.5.2. Un caso de conflicto de dominio sobre un bien inmueble declarado de interés histórico y artístico: La supuesta venta de la Torre del Vino. La Real orden de 10 de julio de 1912. ....</b>	<b>1202</b>
<b>6.5.3. El Real decreto de 14 de marzo de 1913 creándose un Patronato de Amigos de la Alhambra. ....</b>	<b>1204</b>
<b>6.5.4. Un nuevo organismo institucional: El Patronato de la Alhambra. ....</b>	<b>1206</b>
<b>6.5.5. El Real decreto de 23 de abril de 1915 por el que se instituye la Dirección general de Bellas Artes. ....</b>	<b>1210</b>
<b>6.5.6. Las Reales órdenes de 30 de agosto y 4 de noviembre de 1920 relativa a la conservación del Parque de la Alhambra. ....</b>	<b>1212</b>
<b>6.5.7. La adquisición del Generalife por el Estado. ....</b>	<b>1215</b>
<b>7. La tutela pública del Estado sobre las Corporaciones Municipales en el ámbito de la conservación y restauración del Patrimonio Monumental. ....</b>	<b>1217</b>
<b>7.1. El debate conservacionista del urbanismo español de principios del siglo XX. ....</b>	<b>1219</b>
<b>7.2. La protección de los Monumentos Nacionales en el ámbito de la nueva organización administrativa municipal. ....</b>	<b>1220</b>
7.2.1. Las Mancomunidades Provinciales. ....	1220
7.2.2. Los arquitectos municipales y provinciales. ....	1221
<b>7.3. Los conflictos institucionales entre el Estado y las Corporaciones Municipales en torno a la tutela de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico. ....</b>	<b>1222</b>
7.3.1. La tutela del Patrimonio Monumental en el Plan de ensanche de las poblaciones. ....	1222
7.3.2. El deber de conservación de los restos arqueológicos de las Corporaciones Municipales en la construcción de plazas y mercados. ....	1223
7.3.3. El deber de conservación de la muralla y puertas medievales: La conciliación entre los valores monumentales y los intereses municipales de modernización urbana. ....	1225
7.3.4. La desautorización de la demolición de bienes de interés histórico-artísticos. ....	1233
<b>7.4. La configuración inicial del tejido urbano como bien de interés histórico y artístico. ....</b>	<b>1236</b>
7.4.1. El Proyecto de Ley del senador Quesada Cañaveral, Duque de San Pedro del 17 de octubre de 1910 sobre expropiación forzosa de toda la propiedad contigua a cualquier monumento nacional. ....	1236
7.4.2. Un inicio de la protección del tejido urbano como bien de interés histórico y artístico en la ciudad de Toledo. ....	1237

**8. La consagración de los servicios públicos de interés histórico y artístico: Archivos, Bibliotecas y Museos como instrumentos públicos de divulgación de interés histórico y artístico. .... 1243**

**8.1 La configuración de Patrimonio Documental como bien de interés general en la etapa de Alfonso XIII..... 1243**

**8.1.1 Los Archivos de Protocolos como documentos públicos. .... 1243**

**8.1.2. El destino de los Archivos judiciales..... 1246**

**8.1.3. El acceso limitado a los Archivos Militares: la defensa de los intereses nacionales.. 1246**

**8.1.4. El acceso limitado de los Archivos de Hacienda: la defensa de los intereses privados. 1247**

**8.2. El papel del Estado como coleccionista público de bienes histórico y artístico: La restructuración administrativa de la red de museos estatales a principio del siglo XX. .... 1248**

**8.2.1. La constitución de una red nacional de museos públicos. .... 1249**

**8.2.2. La inclusión de las colecciones privadas de particulares y Corporaciones Públicas en el ámbito del dominio público por adquisición, donación o depósito. .... 1256**

- El Estado adquirente de obras de arte por compra a los particulares..... 1257

- El Estado adquirente de bienes muebles e inmuebles de interés histórico y artístico por donación de los particulares: La donación condicionada y la donación en depósito. .... 1258

**8.2.3. La asignación de un crédito presupuestario por parte del Estado. .... 1269**

**8.2.4. La declaración del Museo de Bellas Artes como utilidad pública. .... 1269**

**9. La frustrada aplicación de la ley de 1902 sobre catalogación monumental en la etapa de Alfonso XIII. .... 1270**

**9.1. El papel de las Comisiones de Monumentos en la elaboración de la catalogación monumental. .... 1270**

**9.2. La publicación de inventarios parciales de Monumentos Arquitectónicos. .... 1274**

**9.3. La elaboración de los inventarios de los bienes de interés histórico y artístico por los Delegados Regios provinciales de Bellas Artes a raíz del Real decreto de 10 de octubre de 1919..... 1275**

**9.4. Un intento de revisión de los Catálogos Monumentales: La creación de una Comisión especial de la Real Academia de Bellas Artes. Real Orden de 24 de febrero de 1922..... 1277**

**10. Los límites del tráfico de las obras de arte a principio del siglo XX. .... 1278**

**10.1. El derecho de venta por parte de los propietarios de los bienes muebles de interés histórico y artístico..... 1278**

**10.2. Los aranceles aduaneros como límite en la libre disposición del propietario del bien de interés histórico y artístico..... 1280**

**CAPITULO VII LA PROMULGACIÓN DE UN NUEVO ORDENAMIENTO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE ANTIGÜEDADES FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE EL RÉGIMEN DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930): EL DECRETO LEY DE 9 DE AGOSTO DE 1926..... 1287**

**1. La configuración de una ley tutelar del Patrimonio Monumental. 1289**

**1.1 La venta ilegal de bienes artísticos. .... 1289**

**1.2. El proyecto de Real decreto del Duque de Alba de 1925 sobre la exportación de obras de interés histórico y artístico. .... 1293**

1.3. <i>El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga: un anticipo de la Ley de 1926. La sentencia del Tribunal Supremo del 24 de abril de 1925.....</i>	1295
1.4. <i>Los trabajos de la Comisión encargada de realizar el nuevo proyecto de ley de 1925.....</i>	1303
1.5. <i>La aplicación obligatoria del Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 por Diputaciones y Ayuntamientos: La Real orden de 14 de noviembre de 1929.</i>	1305
<b>2. El triunfo del principio del intervencionismo del Estado como fundamento jurídico de la tutela pública del Patrimonio Monumental en la Exposición de Motivos.....</b>	<b>1306</b>
<b>3. Un nuevo marco administrativo: La reorganización de los servicios del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y la creación de la Junta de Patronato en virtud del artículo 37 del Decreto-Ley de 1926.</b>	<b>1308</b>
<b>4. Una nueva categoría jurídica: Monumentos inscrito en el Tesoro Artístico Nacional.....</b>	<b>1315</b>
4.1. <i>Los bienes que configuran los Monumentos inscritos en el Tesoro Artístico Nacional. ....</i>	1315
4.2. <i>La regulación de los bienes en el seno del régimen patrimonial. ....</i>	1317
4.3. <i>Un nuevo procedimiento administrativo a raíz de la promulgación del Decreto Ley de 1926: La declaración del Bien inscrito al Tesoro Artístico Nacional. ....</i>	1318
<b>5. La tutela específica de los Bienes Inmuebles de interés histórico y artístico.....</b>	<b>1320</b>
5.1 <i>La pervivencia de la declaración de Monumento Nacional y Monumento Arquitecto-Artístico y su inserción en el Tesoro Artístico Nacional durante la etapa del Directorio Militar.....</i>	1320
5.2. <i>El deber de conservación de los Monumentos por parte del Estado. ....</i>	1326
5.2.1. <i>Los proyectos de adaptación y reforma de inmuebles de interés histórico y artístico.</i>	1326
5.2.2. <i>La utilidad pública del monumento.....</i>	1328
5.3. <i>Los límites de la disposición de un bien inmueble de los propietarios privados en virtud de la ley de 1926.....</i>	1329
5.3.1. <i>El traslado de los inmuebles de su sede original.....</i>	1329
5.3.2. <i>El deber del propietario de respetar la identidad del Monumento: La potestad del Estado a la expropiación del bien inmueble adscritos al Tesoro Artístico Nacional de propiedad privada.</i>	1330
5.3.3. <i>La autorización de concesiones: El usufructo de los bienes inmuebles adscritos al Tesoro Artístico Nacional. ....</i>	1331
5.4. <i>La tutela específica del Generalife en el Directorio Militar: El triunfo del intervencionismo centralista de la Administración tutelar en el Directorio Militar.....</i>	1333
5.5. <i>Un nuevo modelo institucional en la tutela del Patrimonio Monumental Inmobiliario: Los arquitectos conservadores.....</i>	1335
<b>6. La configuración del tejido urbano como bien de interés histórico-artístico en base al Real Decreto-ley de 1926. ....</b>	<b>1340</b>
6.1. <i>La configuración del centro histórico como bien de interés histórico y artístico.....</i>	1340
6.2. <i>La inclusión en el ámbito legislativo de la protección del tejido urbano de interés histórico y artístico.....</i>	1342



6.2.1. <i>El deber de conservación de los Monumentos por las Corporaciones Municipales: El Estatuto Municipal de 1924 y su proyección en la conservación del patrimonio histórico-artístico.</i>	1342
6.2.2. <i>La inclusión del Tejido urbano de interés de interés histórico y artístico en el Decreto-Ley de 1926.</i>	1348
6.2.3. <i>Una proyección del ordenamiento del patrimonio monumental en la tutela pública del patrimonio natural: la configuración de la categoría jurídica de sitios de interés nacional y de monumentos naturales de interés nacional.</i>	1352
<b>7. Una nueva regulación del Patrimonio Eclesiástico Español: El Real Decreto de 9 de enero de 1923.</b>	<b>1354</b>
7.1. <i>La aplicación del Real decreto de 9 de enero de 1923 en el ámbito del Real decreto-ley de 1926.</i>	1354
7.1.1. <i>El principio de intervención administrativa en el Patrimonio Monumental Eclesiástico insertado en la Exposición de Motivos del Real Decreto de 9 de enero de 1923.</i>	1355
7.1.2. <i>Los bienes regulados.</i>	1358
7.1.3. <i>La autorización del Estado para la enajenación de los bienes del Patrimonio Eclesiástico.</i>	1358
7.1.4. <i>El procedimiento sancionador por venta fraudulenta en virtud del artículo 8º del Decreto-Ley de 1923.</i>	1363
7.1.5. <i>La Creación de los Museos Diocesanos.</i>	1365
7.2. <i>La tutela pública sobre un bien de interés religioso en la dictadura de Primo de Rivera: El caso del Monasterio de Poblet</i>	1365
7.3. <i>La reacción de la Iglesia a la vigencia de la Ley de 1926: La Declaración del Episcopado español del 28 de noviembre de 1929.</i>	1366
<b>8. Los límites del derecho privado del Patrimonio Monumental en el ámbito de la intervención administrativa.</b>	<b>1372</b>
8.1. <i>Una singular protección del Patrimonio Arqueológico: La aplicación de la Ley de 1911 y el Reglamento de 1912 en el periodo del Directorio Militar.</i>	1372
8.2. <i>Unas nuevas medidas de regulación del tráfico de obras de arte.</i>	1389
8.2.1. <i>Las aportaciones de la Ley de 1926.</i>	1389
8.2.2. <i>El delito de contrabando en el ámbito de la tutela penal: La configuración del Patrimonio Monumental como bien de interés jurídico.</i>	1392
8.2.3. <i>Una nueva regulación de la exportación de bienes de interés histórico y artístico al final del régimen militar: la Real Orden de 28 de abril de 1930 y el Real Decreto de 2 de julio de 1930.</i>	1393
<b>9. Las transformaciones estructurales de los Servicios Públicos de interés Cultural.</b>	<b>1394</b>
9.1. <i>La política centralizadora en la tutela del Patrimonio Documental.</i>	1394
9.2. <i>El Estado adquiriente de obras de arte: Una nueva regulación de los museos públicos.</i>	1398
- <i>Inventario de los Monumentos Históricos y Artísticos del Reino.</i>	1406
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>1408</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>1426</b>

---

## **AGRADECIMIENTOS**

---

Mi agradecimiento preferente está dedicado a mi familia, especialmente a mi madre, que ha ido conviviendo muchas horas de pesadumbre en la elaboración de la presente tesis, a lo que quiero unir a mis amigos de grupo de San Francisco de Paula que han estado constantemente apoyandome.

Quisiera resaltar la cooperación en todo momento de las compañeras y compañeros del departamento de Ciencias Sociales de la Escuela de Magisterio del Campus Universitario de Bormujos de la Fundación CEU ANDALUCIA, que me dieron su apoyo constantemente, especialmente a Mauricio Carrillo, que nos une a ambos profesionalmente a parte de nuestra amistad la profesión de historiadores del arte, Virginia Borrero, a la que tuve oportunidad de intervenir en la defensa de su tesis, Francisco Blanc, que estuvo muchas tardes al lado mía dándome ánimos en todo momento, a mis antiguos alumnos y hoy compañeros Jaime y Zacarias, a los que quiero unir ese agradecimiento a otros compañeros de otros departamentos como son José Manuel de la Plata, María Carmen Sánchez, Juan Holgado, Rafeal Barea, Jose Eduardo Vilchez, Magdalena Martínez, Carmen Durán, Maria Carmona, Víctor Barrera, Teresa Escobar, Marta Hernández, Marta Reina y Marta Ceballos.

No debería de olvidar a todos los alumnos y alumnas de las últimas promociones que me han llenado con su sola presencia la vitalidad necesaria para poder compaginar docencia e investigación.

Una especial muestra de cariño quiero constar en la persona de Manuel Martín Riego, Doctor en Historia de la Iglesia, por el trato especial que me he llevado de su persona, así como los consejos académicos y personales que he ido asimilando en estos últimos años.

Quisiera asimismo resaltar el apoyo que me ha ido mostrando una persona muy cercana en este último periodo de mi vida como es mi compañera del departamento, María José Villalba, que con todo cariño quiero reconocer.

Quiero recordar en estas páginas de agradecimiento a Don Antonio de la Banda, Catedrático de Historia del Arte, que además de ser mi primer director de tesis me abrió el camino de la investigación académica.

De la misma manera quisiera agradecer la colaboración del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas, especialmente el personal administrativo, al igual que el personal de Biblioteca de la Facultad de Derecho por el trato tan especial ofrecido en todo momento.

He dejado para el último renglón de esta página a mi Director de Tesis, Don Antonio Merchán, con la clara intención de resaltar no solamente su desinteresado apoyo en todo momento en la elaboración de este trabajo de investigación, sino incluso en mi misma carrera como docente e investigador universitario.

---

## **PRESENTACION**

---

### **1. En torno a un objetivo de la presente investigación: El Patrimonio Cultural en el seno de los derechos patrimoniales como objetivo de la Historia del Derecho.**

#### **1.1. El Patrimonio Cultural como objeto de la historia del arte y de las instituciones.**

En los últimos años han ido saliendo a la luz en el ámbito español una amplia bibliografía sobre el Patrimonio Cultural, siendo en un principio objeto de análisis de la Historia del Arte, especialmente con la desaparición de un gran número de bienes que habían ido perdiéndose con las transformaciones estructurales que comenzaron a tener un gran número de ciudades españolas, el impacto del turismo o incluso la prolongación del comercio de obras artísticas, en su mayoría fraudulentas. Desde esta perspectiva en el año 1958 sale a la luz un trabajo exhaustivo del historiador del arte Juan Antonio Gaya Nuño “La pintura española fuera de España: Historia y Catálogo”, donde se expone por primera vez con metodología científica a modo de inventario los avatares que habían dado lugar a la pérdida de un amplio número de obras de artes procedentes de las colecciones privadas, eclesiásticas e incluso pública, completándolo con un trabajo posterior, La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, publicado en 1961, en donde se incluían un análisis de un amplio número de bienes inmuebles que se habían perdido a lo largo de los últimos tiempos. Ya en los años ochenta un profesor de la Cátedra de la Historia de la Arquitectura de la E.T.S.A. de la Universidad Politécnica de Madrid y Conservador del Alcázar de Segovia publicaría un interesante estudio con el título Patrimonio monumental español exiliado, en la revista de Patrimonio Histórico Koine, en junio de 1986, y en julio-septiembre de 1986, donde hacía una amplia referencia de cómo había sido desposeído nuestro país de una amplia parte de su legado artístico e histórico. Cuatro años después, publicaría en la Revista de Extremadura en mayo-agosto de 1990, “El elginismo en España. Algunos datos sobre el expolio de nuestro Patrimonio Monumental”. La desaparición de los bienes muebles sería abordada por las investigaciones del Catedrático de Historia del Arte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Pedro Navascúes Palacios, especialmente en el caso específico de la desaparición de los coros monumentales de los templos que fueron objeto de un amplio mercado fraudulento.

Otro de los campos que fueron abordados en esta etapa serían los problemas generados con la restauración inmobiliaria de bienes de interés histórico y artístico, especialmente reflejado en las obras de Pedro Navascúes Palacio, *La restauración de los monumentos en España: Aproximación bibliográfica (1954-1994)* y *la restauración monumental como proceso histórico: El caso español*,

1800-1950, Ignacio González-Varas Ibañez Restauración Monumental en España durante el siglo XIX (Valladolid, 1996), Isabel Ordieréz Díaz Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936) (Madrid, 1995), José María Calam y Amparo Graciani García, La restauración decimonónica en España (Sevilla, 1998), y A. Muñoz Cosme La conservación del Patrimonio Monumental español (Madrid, 1989). El coleccionismo de obras de arte como objeto de investigación científica se ha impuesto en estos últimos años, especialmente el del ámbito local, por lo que no contamos todavía hoy con una monografía aglutinadora sobre el mismo. Sería prácticamente imposible incluir aquí, ni tampoco es nuestro objetivo la existencia de una amplia producción de trabajos sobre el ámbito museográfico, de gestión cultural y de biblioteconomía, ha enriquecido el estudio del Patrimonio Cultural. No obstante quisiera resaltar la labor realizada en los últimos años en torno a la cuestión del coleccionismo público de Aurora León y María Bolaño, especialmente en torno a la museografía pública. Al mismo desde las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando se ha ido haciendo una labor excepcional de la historia del institucionalismo administrativo de la protección monumental especialmente por la insigne labor de Jorge Maier y Martín Almagro que en los últimos años han publicado una excepcional producción investigadora. De la misma manera se ha ido realizando en la historia del institucionalismo arqueológico una amplia labor por parte de Ignacion Salas y José Beltrán.

## **1.2. EL Patrimonio Cultural como objeto de la historia del Derecho.**

La primera cuestión que nos hemos planteado a la hora de presentar este trabajo de investigación es incluir el análisis del Patrimonio Cultural en el ámbito de la historia del Derecho, materia que en principio nos podrían achacar más acorde con la historia del Arte, las ciencias del Patrimonio, e incluso en el ámbito del Derecho, el derecho administrativo. ¿Por qué el Patrimonio Cultural en el ámbito del análisis científico de la historia del Derecho? En principio Derecho y Arte podemos considerarlos como dos caminos irreductibles, distintos, sin ningún tipo de permeabilidad entre unos y otros, ya que el primero se dedicaría a la regulación de la conducta social y el otro a la creatividad puramente humana. Sin embargo, cuando el artista crea se está generando unos derechos inherente a su obra, que necesita de una protección pública de reconocimiento, en base a su trabajo, y al producto final del mismo, que es la propia obra en sí, generando una necesidad de protección por parte del Estado, que recaiga subjetivamente y objetivamente al creador. Pero en el momento que la obra de arte considerada por la sociedad se pone en circulación generando una regulación comercial entre posibles compradores, dando lugar a un verdadero mercado, el Estado en un momento determinado deberá imbuirse en la propia relación privada regulando las propias transacciones. De ahí que la obra de arte deja de ser un mero objeto de

exposición para convertirse en un bien económico, en donde confluirán todo tipo de intereses, y al mismo tiempo generará todo tipo de conflictos, más aun si dicho bien hubiera sido reconocido socialmente desde las instancias públicas, y se hubiera convertido en un símbolo de identidad social. Desde esta perspectiva el arte se convierte en objeto del derecho, y se va incluyendo en los llamados bienes de interés público que van regulando a lo largo de la evolución de la sociedad los distintos sistemas normativos. El debate vendrá en cuanto a qué medida el Derecho entrará a regular el mundo del arte, cuáles serán sus prioridades, si solamente deberá regular aspectos del mercado, o de la propia creatividad artística. Incluso el binomio Arte-Derecho se insertará en los conflictos generados de la propia libertad de mercado, por lo que desde el dominio privado, el propietario podrá indistintamente adoptar libremente la decisión de salvaguardar la obra o deshacerse de ella en una simple operación mercantilista. Y es que en muchas ocasiones las operaciones de compra y venta de obras de arte no ha estado ajena de la indignación social, más aun cuando en la mayoría de los casos el propio Derecho no ha podido responder a las innumerables circunstancias generadas en este ámbito.

Si la necesidad de una regulación específica sobre el Patrimonio Cultural, no cabe hoy duda, su inserción en la Historia del Derecho pueda aparecer marcado por una polémica doctrinal. Para responder a esta cuestión, tendríamos que introducirnos en una problemática aún mayor que sería plantearnos a que llamamos conceptualmente Historia del Derecho, cuestión que sería en este momento inabarcable, pero que en forma sucinta nos podría ayudar a responder a la cuestión planteada. Ya García Gallo criticaba la consideración de que la historia del derecho se convirtiera en ciencia histórica, sino que era ciencia jurídica por su finalidad, orientación, y método, alejándose de las orientaciones dogmáticas que hacían perder su esencia inicial, especialmente en Alemania en el siglo XIX. Aunque cabe mencionar que en García Gallo se fue generando una evolución que muchos de sus coetáneos tuvieron de pasar a considerar a la Historia del Derecho como ciencia histórica a convertirla en una materia de especialidad jurídica. De esta manera en 1952 en su Manual de Historia del Derecho la definiría como ciencia jurídica que opera con el método histórico. Sería Tomás y Valiente quien insistiría en la identidad de la historia del derecho al afrontar el problema de la historicidad del derecho al admitir al *Derecho como una realidad histórica, ningún problema concerniente a sus características o a sus fronteras es ahistórico... Por ello, el Derecho no consiste solamente en las normas estáticamente consideradas, sino que extiende su realidad a la eficacia de tales normas, a su aplicación e interpretación*<sup>1203</sup>. Una de las líneas más significativas de la Historia del Derecho fue sin duda el análisis del institucionalismo, muy en la

---

<sup>1203</sup> TOMAS Y VALIENTE, F. *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid, Tecnos, 2010.

<sup>1204</sup> MARTIN MATEO, R. "La propiedad monumental", *Revista de Administración Pública*,

línea de las investigaciones de García Gallo, que llegaría a afirmar *que a pesar de que la Historia de las Instituciones es una ciencia histórica, requiere además del auxilio de un tratamiento jurídico-dogmático de su objeto*, tesis que sería recogida por el propio Salustiano de Dios. Sin embargo, esta historiografía institucionalista se vería rebosada por otros campos, que parafraseando al profesor Jesús Vallejo *la historia del derecho era todavía en gran medida, una historia de las instituciones (...) las investigaciones que declaradamente se sitúan en su terreno, suelen ocuparse del estudio de una institución, de orden normativo por lo común en el campo del derecho privado o de carácter orgánico en el de la historia del derecho público*. Pero a la hora de plantear el objetivo de su trabajo, matiza con los siguientes términos: No se quiere proceder a la disección –o construcción según los casos- de una institución, sino el análisis de un problema. Y es aquí la clave donde intento abordar la cuestión planteada. La inclusión del análisis del Patrimonio Monumental en la historia del Derecho no viene aparejada solamente como una historia de instituciones, que ya lo abordaría el derecho administrativo o una historia de las instituciones, ni siquiera como la historiarización de un bien a proteger, sino que a diferencias de otros enfoques metodológicos, se plantearía un problema jurídico, como es la regulación de los bienes que configuran el Patrimonio Cultural en el seno de los derechos patrimoniales, generando los pertinente conflictos tutelares entre Estado y propietario, convirtiéndose por sí mismo en el fundamento propio de esta investigación. De ahí la construcción dogmática de convertir un problema jurídico en el verdadero núcleo de la construcción tutelar del propio bien.

Una primera recopilación de la normativa sobre legislación del Patrimonio Monumental en España sería la que tiene por título *Compilación Legislativa del Tesoro Artístico Nacional* publicada en 1931, que ha sido objeto de reflexión por parte Javier García Fernández, resaltando dos características primordiales, el carácter anónimo del recopilador o recopiladores, al firmarlo la Sección de Publicación, Estadística e Informaciones de Enseñanza del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y en segundo lugar, el propio colofón de la obra, aludiendo a la fecha en que finaliza la obrita, 10 de febrero de 1931, recogiendo ciento catorce normas, especialmente de la época de la Restauración. Serían en los años de la transición cuando aparece dos obras que marcan un antes y un después en la historiografía jurídica del Patrimonio Monumental, *La transmisión de la obra de arte*, de José Luís Alvarez Alvarez, y *El Patrimonio Artístico y Cultural* de Eduardo Roca Roca, publicado en 1976, que palabras de Javier García Fernández era el primer trabajo que examinaba el Derecho del Patrimonio de manera general, omnicomprendiva, desde todos los ángulos posibles, siendo la primera aportación total a una rama del Derecho que nadie había intentado examinar con una perspectiva completa. El libro de Roca se dividía en trece capítulos, donde ya abordaría la cuestión primordial a la hora de analizar el bien jurídico, la propiedad histórica-artística o propiedad monumental.



En el ámbito de la regulación de las excavaciones arqueológicas cabe hacer mención la síntesis de A. Yañez Vega titulado el Estudio sobre la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911 y el Reglamento para su aplicación de 1912 (1997) y Yañez Vega y A.C. Lavín Berdonces La legislación en materia de Arqueología hasta 1912: análisis y evolución en su contexto (1999). Sobre la concepción de los bienes arqueológicos como dominio público cabe destacar las obras de A. Barcelona Llop El dominio público arqueológico publicada en la Revista de Administración Pública (2000), Aspectos del régimen jurídico de las autorizaciones arqueológicas en la Revista Aragonesa de Administración Pública (2002). En el ámbito del derecho penal, cabe destacar los trabajos realizados después de la promulgación del Código Penal de 1995 como los de Roma Valdés Las excavaciones ilegales y la protección penal del Patrimonio Histórico, en Revista del Derecho Ambiental, 17, 1996; del mismo autor, La protección penal del Patrimonio Arqueológico, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Madrid, 1998; JUAN PEREZ ALONSO, Los delitos contra el Patrimonio Histórico en el Código Penal en 1995, Actualidad Penal, 1995 A. Roma Valdés La protección penal del Patrimonio Arqueológico en Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal (1998), y El expolio del patrimonio arqueológico español en Patrimonio Cultural y derecho (2002) o de C. Salinero Alonso, C. La protección del Patrimonio Histórico en el Código Penal de 1995 (1997), de J.M. García Calderón La protección penal del patrimonio histórico mueble (2001) o los de M. García Pazos y L.M. Arroyo Yanes La policía del Patrimonio Histórico. Prevención, persecución y sanción de las infracciones contra el Patrimonio Histórico Mueble en España (2001); N.A.R. Lang La protección del patrimonio arqueológico contra el expolio (2002); J.M. Magán Perales La protección policial del Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Cultural y Derecho (2001); Cristina Guisasola Lerma, Delitos contra el Patrimonio Cultural: Artículos 321 a 324 del Código Penal, Valencia, 2001; Jesús María García Calderón La protección penal del Patrimonio Arqueológico en Patrimonio Cultural y Derecho, 7 (2003).

### **1.3 La concepción patrimonialista del Derecho del Patrimonio Monumental de la España Liberal en la historiografía jurídica española. Una hipótesis de trabajo.**

En el discurso pronunciado por Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna en el acto de su recepción pública el 1 de diciembre de 1991 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid con el título de *las competencias del Estado sobre el Patrimonio Histórico Español en la Constitución de 1978*, planteaban la cuestión del Patrimonio Monumental como problema esencial de la cultura española: *las cuestiones sobre las que ha habido que decidir no son otras que las tres siguientes: ¿existe o no una cultura que pueda, en rigor, merecer el nombre de española, con el correspondiente Patrimonio Cultural legado por el pasado?; en segundo término, ¿cómo han de concebirse esa*

*cultura y ese Patrimonio en relación a los de los pueblos de España?; por último, ¿el Estado, como conjunto de las instituciones generales, qué ha de hacer, específicamente, con el Patrimonio Cultural de España? Todas estas cuestiones son, claro está, asuntos recurrentes en nuestra historia contemporánea. Su mera presencia en el corazón del debate político e intelectual, desde finales del siglo pasado hasta hoy, demuestra, sin duda, la dificultad de resolverlas, pero no por ello la imposibilidad de hacerlo. La llegada del Estado Democrático en España en 1975 abre sin duda un nuevo capítulo en la historia de la protección monumental en nuestro país, bien porque se consagra el principio del constitucionalismo cultural con la incorporación del artículo 46 que va a significar sin ninguna duda el respaldo institucional de la conservación del Patrimonio Histórico-Artístico y la consiguiente promulgación de la Ley de 1985, y las sucesivas leyes autonómicas, de las que, se han derivado un gran número de normas en todos los ámbitos sectoriales.*

Si lleváramos esta reflexión a la etapa de la España Liberal, se ha cuestionado en innumerables ocasiones las causas predominantes de la frustrada configuración de un verdadero sistema normativo tutelar del Patrimonio Monumental en el ámbito hispano. Entre ellos cabría destacar varios factores que impidieron la delimitación definitiva de una legislación sobre el Patrimonio Monumental: 1º) Las circunstancias políticas del periodo político que analizamos no favorecieron en ningún momento a una protección monumental en el sentido moderno del término. Las sucesivas invasiones, las oleadas revolucionarias que asolarían la Península que llevarían a sucesivos cambios dinásticos y por consiguientes de regímenes políticos, las distintas medidas desamortizadoras, que harían desaparecer una amplia parte del Patrimonio Religioso, los distintos expolios del tráfico ilegal de bienes muebles e inmuebles no dejaron de ser factores determinantes de la pérdida del Patrimonio Histórico-Artístico, que en la mayoría de los casos el Estado no pudo solventar; 2º) La carencia de una verdadera conciencia patrimonial en el sentido de valorizar una serie de bienes que lo identificara como propio por la sociedad a la que perteneciera, en una población común en que su formación cultural era prácticamente mínima. No debemos de olvidar que para la gran mayoría de la población el Patrimonio Religioso no es identificado en este momento como Patrimonio Cultural sino que lo perciben como meros objetos de cultos, tanto en el caso de los bienes muebles (especialmente imágenes devocionales e incluso lienzos) como en los bienes inmuebles (las iglesias eran ante todo era un edificio de culto), incluso después de las medidas desamortizadoras ya que muchos de estos edificios van a seguir siendo utilizados con fines religiosos. El Patrimonio Monárquico, que se integrará como bienes nacionales, no queda perfectamente perfilado en el ámbito de lo cultural para la gran mayoría de la población. Las instituciones de divulgación cultural que nacen en este momento como los Museos Nacionales o Provinciales serán destinadas para una minoría cultural; 3º) La propia estructura social no va a acompañar en la configuración de una verdadera protección monumental. A pesar de que se ha ido perfilando lentamente un

régimen político liberal, grandes sectores de la población siguen impregnada de una cultura tardobarroquista, de fuerte tradición religiosa, especialmente proyectada en una ortodoxia católica, y de unos gustos estéticos muy delimitados que le va a limitar a la hora de apreciar nuevas miradas no solamente al ámbito artístico sino incluso a formas de vida ajena a su circunstancia vital, por lo que no va a estar preparada para asumir nuevos modelos culturales que en la Europa liberal se va ir delimitando y 4º) No existe hasta la segunda mitad del siglo XIX un verdadero ambiente científico que genere una mirada erudita al legado patrimonial en España, a pesar de la existencia desde el siglo XVIII de la existencia de instituciones académicas. En el ámbito universitario no ha introducido planes de investigación de metodología científica como ha ocurrido paulatinamente en otros contextos europeos, que en muchas ocasiones harán que en el caso de analizar el legado patrimonial el criterio esteticista se impusiera a connotaciones.

Sin embargo, será en la propia construcción jurídica del Patrimonio Monumental fundamentado en los derechos patrimoniales donde encontraríamos el verdadero obstáculo a la hora de elaborar un sistema normativo, cuestión que ha encontrado eco en la propia historiografía jurídica española. En 1966 Martín Mateo en un artículo titulado *la propiedad monumental* ya daba una primera radiografía del panorama desolador que había supuesto la legislación en el periodo liberal precedente, especialmente en el ámbito urbanístico, donde la Administración se enfrentaría con un sistema de propiedad inmobiliaria opuesto a toda merma, que había desembocado en un verdadero aluvión normativo<sup>1204</sup>. Posteriormente en 1978 Tomás Ramón Fernández atribuía las carencias históricas de la protección monumental a motivos económicos y de la misma protección administrativa: *El sistema no ha funcionado satisfactoriamente ¿Por qué? La respuesta no es difícil. Por una parte, parece claro que el sistema de Comisiones de Notables, es decir, la fórmula de la Administración honoraria que tradicionalmente se ha empleado en este sector, dista mucho de ser eficaz cuando el volumen de gestión a desarrollar alcanza ciertas proporciones. España es un país de larga historia, que cuenta por ello con un patrimonio monumental muy grande, cuya adecuada gestión exige inexcusablemente una infraestructura administrativa muy profesionalizada, amén de sólida y bien dotada. Esa infraestructura administrativa nunca la hubo y sigue sin haberla hoy (...) Por otra parte, es igualmente obvio que un alto nivel de eficacia no puede conseguirse nunca sin los adecuados medios materiales (...) La acción pública nunca estuvo debidamente apoyada en el plano económico. Más aún, la Administración nunca eludió confesar su notoria debilidad en este sentido. Quería proteger el patrimonio, pero nunca estuvo dispuesta a gastar dinero ni siquiera en los monumentos de su propiedad. La fórmula de la cesión de éstos a Corporaciones y particulares, iniciada por la Ley de 1915 y mantenida por el Real Decreto-Ley de 1926, es explícita en este*

---

<sup>1204</sup> MARTÍN MATEO, R. “La propiedad monumental”, *Revista de Administración Pública*, 49, 1966, p.50.

sentido. La posterior responsabilización de Diputaciones y Ayuntamientos en esta materia lo es igualmente. A la Administración del Estado le han faltado siempre posibilidades materiales de actuación. Le ha faltado, también. Autoridad moral para exigir a otros lo que ella misma no parecía dispuesta a hacer. Es, en fin, evidente, que las técnicas de policía, en las que ha radicado y radica el centro de gravedad del sistema, no bastan por sí solas, para asegurar un adecuado nivel de conservación. Imponer el deber de conservar, que es carga pesada, sin ofrecer al mismo tiempo a los obligados a ello alicientes y compensaciones adecuadas es una actitud condenada de antemano al fracaso (...) La consideración como públicos de los monumentos formalmente declarados y las exenciones fiscales arbitradas hasta ahora, han carecido siempre del atractivo necesario como compensación de las cargas inherentes a la conservación<sup>1205</sup>. Gloria González Úbeda Rico estimaba en 1981 como nuestra legislación en materia de Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural, no es precisamente una muestra ni de sistemática, ni de coherencia, ni de precisión de conceptos. Más bien constituye una serie de normas que, salvo raras excepciones, han sido dictadas según han ido surgiendo los problemas o el expolio de nuestro Patrimonio Histórico-Artístico se hacía más evidente y manifiesto. Una característica común de esta legislación es su continuo incumplimiento, reconocido por los propios legisladores, que una vez intentan nuevas cautelas, nuevas medidas para impedir la salida del Tesoro Artístico del territorio nacional, o para obligar a su adecuada conservación<sup>1206</sup>. García de Enterría en la conferencia pronunciada en Madrid el 4 de noviembre de 1983 ante la asamblea de Hispano Nostra, con motivo de la VI Reunión de Asociaciones y Entidades para la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, en referencia a la normativa que se había realizado en el siglo XIX delimitaría una serie de problemas trascendentales a la hora de configurar un verdadero derecho del Patrimonio Histórico-Artístico: *Primero, el nuevo siglo se presenta con una especial seguridad, con una fe resuelta, en su propio proyecto modernizador y, por consiguiente, con cierto desdén por los prestigios legados por los siglos pasados. Segundo, el siglo conoce una especial potenciación de la institución de la propiedad privada como central de la sociedad (...) Se afirma así un principio de libre disponibilidad de los propietarios respecto de sus bienes, sean históricos o artísticos o dejen de serlo, recinto amurallado en el cual el Estado y su política de protección no va poder penetrar eficazmente. Tercera razón de la debilitación del entusiasmo de la legislación protectora en el siglo XIX, el utilitarismo burgués, el utilitarismo de la nueva clase industrial que se expresa en la nueva moral económica, el expansionismo, en lo que se llamará más adelante el darwinismo social, es decir el triunfo de los más fuertes, el triunfo de las tendencias más activas frente a los valores inermes, como son en definitiva, los valores artísticos e históricos. Todo esto va a limitar la acción*

<sup>1205</sup> RAMON FERNANDEZ, "La Legislación española sobre el Patrimonio Histórico-Artístico. Balance de la situación de cara a la reforma", *Revista de Derecho Urbanístico*, 60, 1978, pp.13-36.

<sup>1206</sup> GONZÁLEZ-UBEDA RICO, Gloria *Aspectos jurídicos de la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural* Cultura y Comunicación, 17, Ministerio de Cultura, Madrid, 1918, p.25.

*administrativa de protección en mano pública*<sup>1207</sup>. Piedad García-Escudero y Benigno Pendas García al analizar la evolución de la legislación española hasta la promulgación de la actual ley muestra un panorama desolador: *En materia del patrimonio histórico y cultural, como en muchos otros sectores del ordenamiento jurídico, el derecho histórico español no responde a una lógica interna que permita hablar de la existencia de un sistema en sentido estricto. Por el contrario, con la excepción de momentos muy específicos (centrados especialmente a las leyes de 1933 y 1985), el elemento racional ha sido desbordado con frecuencia por el elemento histórico, con la consiguiente promulgación de una serie heterogénea de normas que ha no coexistido sin integrarse en un todo coherente, por haber sido dictadas a tenor de impulsos coyunturales (...). Sin embargo, a pesar de los graves defectos derivados de la ausencia de criterios coherentes en su elaboración, no deba buscarse tal vez en la legislación la causa principal de las deficiencias de la política general sobre el patrimonio artístico y cultural (...) Es verdad, que la normativa sobre bienes muebles, y más aún sobre otras manifestaciones del patrimonio histórico, ha sido mucho más defectuosa y que, por otra parte, las medidas de policía administrativa no han sido acompañadas de una política consciente y razonable de fomento (...) A pesar de todo, más negativas que las innegables deficiencias legislativas ha sido la constante precariedad de medios económicos en que se ha desenvuelto la Administración de Bellas Artes y, como consecuencia directa de ello, el sistemático incumplimiento de muchas disposiciones (...)*<sup>1208</sup>. Gloria González-Úbeda precisa como estamos en presencia de normas, que salvo raras excepciones, fueron dictadas según fueran surgiendo los problemas o cuando el expolio se fue haciendo evidente en nuestro patrimonio histórico-artístico<sup>1209</sup>. García Fernández en su prólogo a la Legislación del Patrimonio Histórico pondría de manifiesto como una de las características más destacadas de la normativa del siglo XIX radica en *el predominio de la propiedad, expresado no solo en el régimen jurídico patrimonial, sino en la idea de que la distinción propiedad pública/propiedad privada es la base del régimen de intervención administrativa en la protección activa de los bienes históricos-artísticos, especialmente en los bienes inmuebles*<sup>1210</sup>. Al mismo tiempo Piedad García Escudero y Benigno Pendas García señalan *los tres principios clave en la fundamentación de la construcción técnica- jurídica del Patrimonio Histórico que va a persistir hasta la legislación republicana: la concepción absoluta de la propiedad, la actuación puramente conservadora de los poderes públicos y el aislamiento de la teoría jurídica del patrimonio histórico respecto a otros sectores afines del ordenamiento. A lo que añade la evolución propia del Estado social y democrático de Derecho ha producido la crisis irreversible de estas ideas, hoy anacrónicas, aunque muy arraigadas, hasta hace poco tiempo. M<sup>a</sup> del Rosario Alonso Ibáñez se refiere prácticamente en los mismos términos que años antes había planteado García Enterría: La situación de deterioro en que se encontraba el*

---

<sup>1207</sup> GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural *Revista Española de Derecho Administrativo*, nº 39, 1983, pp.576-582.

<sup>1208</sup> GARCÍA-ESCUDEO, Piedad; PENDAS GARCÍA, Benigno *El nuevo régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español*, Ministerio de Cultura, 1986, pp.25-27.

<sup>1209</sup> GONZÁLEZ-UBEDA, Gloria, 1981, p.78.

<sup>1210</sup> GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier, 1987, pp.43-44.



*Patrimonio Histórico a la entrada en vigor de la Constitución de 1978 era reveladora de la más absoluta ineficacia de las diferentes leyes de tutela que se habían ido sucediendo. Ineficacia, en primer lugar, debido a la extrema penuria de medios financieros con que desde los poderes públicos se pretendía hacer frente a tan magna tarea. La acción pública en esta materia nunca ha estado debidamente apoyada en el plano económico (...) La Administración del Estado, tradicional titular de las competencias en esta materia, ha tratado de trasladar siempre la responsabilidad de asumir, aunque sólo fuera parcialmente, el coste económico derivado de la conservación del Patrimonio Histórico de mayor relieve, bien a las depauperadas arcas de la Administración Local, bien a los propietarios de los bienes, sobre los que sigue pesando, con carácter de exclusividad, el deber de conservación de los mismos (...) Ineficacia, en segundo lugar, debida a las deficiencias de una organización administrativa carente de un aparato administrativo, mínimamente profesionalizado (...) hay que poner de manifiesto en este momento que la adecuada gestión del Patrimonio Histórico exige inexcusablemente una organización administrativa muy profesionalizada, que nunca ha existido. Por contra, la organización administrativa del Patrimonio Histórico se ha basado, y se sigue basando hoy en día, en órganos honorarios sobre los que giran importantes competencias de gestión específica, tales como las Reales Academias de Historia y Bellas Artes, Comisiones de Patrimonio y Patronatos (...) La carencia de una infraestructura organizativa adecuada se ha dejado traslucir, por ejemplo, en el suficiente conocimiento de los bienes que hay que proteger (...) Pero la labor de inventario acusa un defecto en cuanto a su concepción general, es considerada como una actividad administrativa secundaria, no como una actividad principal que debe de llevar a cabo una Administración especializada en esta materia premisa de la misma acción de tutela (...) El inventario y catalogación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico es una empresa que está aún por hacer en este país, fundamentalmente, a los bienes de naturaleza mueble (...) aunque hay que reconocer que se han encontrado con la oposición de los titulares de los mismos bienes (...) Ineficacia, en tercer lugar (...) el centro de gravedad de la normativa de protección ha radicado en técnicas administrativas de policía, técnicas que por rigurosas que sean, no bastan por sí solas (...) Por otro lado, las técnicas de policía no han ido acompañadas de unas medidas suficientes de fomento (...). A todo ello hay que añadir la inexistencia de unidad normativa (...) En el fondo todo ello lo que late de una concepción globalizadora de todas las manifestaciones del Patrimonio y un desconocimiento de su significado mismo, del valor cultural que representa (...) La escasa conciencia del valor que representa el Patrimonio Histórico se traslucía en una animadversión o rechazo hacia las leyes de tutela, las cuales se consideraban más como negadoras que como tuteladoras de la libertad de todos. Luis Anguita Villanueva, por su parte, subraya como el siglo XIX representa jurídicamente la preeminencia de la concepción de la propiedad privada. Se puede decir, con alguna excepción, que todo el ordenamiento jurídico de este siglo presenta el límite de la propiedad privada. La dicotomía propiedad pública/propiedad privada es la base del régimen de intervención administrativa en la protección activa de los bienes culturales. A lo que añade en el ámbito de la propiedad privada en sentido estricto, impera el principio de que esta materia sólo suelen afectar a los bienes de titularidad pública o eclesiástica dejando al margen las facultades o poderes del propietario que no se ven mermados por limitación o restricción en las mismas por mandato de la autoridad. Dicha disposiciones aparecen como una*



*petición a los propietarios de las obras de arte de que actúen de tal o cual manera, dejando a su libre albedrío*<sup>1211</sup>. José Luis Alvarez Alvarez en su artículo publicado en 2004 con el título *Las limitaciones del Dominio por causa del Patrimonio Histórico-Artístico* ya nos anuncia algunas connotaciones dignas de tener en cuenta a la hora de abordar su estudio: *La mayoría de estas piezas se caracterizan por tener un valor superior al intrínseco por ese añadido histórico o artístico; son piezas únicas e irrepetibles con las características que se nos presentan en el día de hoy; son elementos indispensables para el estudio de determinados aspectos de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra sociedad; y casi nunca está en manos de sus creadores, sino que el titular es persona distinta de su autor y existe en ellas la incorporación de un factor de autoría sea individual o colectiva, que las tipifica. Estos cuatro factores: su superior valor, su irrespetabilidad, su carácter de fuente de la Historia y la inclusión en ellas de un elemento de creación espiritual dan a esta propiedad un carácter específico y justifican un tratamiento especial. La característica de estos bienes culturales es que tienen una naturaleza diferente y exigen un tratamiento legislativo distinto de los bienes normales. Nos hallamos, hablando ahora jurídicamente, ante un caso de propiedad especial, y cualquiera que sea el fundamento de la propiedad, se explica y se justifica ese carácter de estos bienes. Si basamos el carácter de la propiedad en su función social (...) nos encontramos con que esta función, en los bienes que forman el Patrimonio Histórico, exige un particular tratamiento. Los bienes de esa naturaleza, aunque sean de naturaleza privada sirven institucionalmente a fines de interés social; por eso tienen que estar sujetos a un particular régimen en el que se armonicen los intereses privados y la tutela pública. Y si basamos la propiedad en la concurrencia de intereses privados, este interés público es el que justifica la intromisión del Derecho Administrativo, que es lo que está sucediendo en algunos casos de propiedad privada*<sup>1212</sup>. Todos los ordenamientos jurídicos dedicados a la protección monumental desde el régimen borbónico hasta la II República van a centrar su atención en los derechos y deberes tanto de los propietarios privados como las posibilidades de intervención que la Administración estatal va a tener sobre los mismos. Podemos afirmar que prácticamente hasta la Ley de 1911 el derecho de la propiedad privada va a limitar la intervención de la Administración.

En la actualidad se pone en cuestionamiento la teoría clásica del dominio público, incluso su propia existencia, defendida por Nieto al precisar *que la teoría del dominio público sería una categoría lógica que la doctrina importaría de Francia y el Código Civil adoptaría luego a su modo, para terminar introduciendo una confusión que cada día se agrava más y a la que es urgente poner fin, aunque para ello sea preciso abandonar la teoría del dominio público, cuyos días –no es difícil predecirlo, aunque cause a algunos cierto escándalo- están contados*<sup>1213</sup>. *La función social del inmenso conjunto de bienes que conforman el Patrimonio histórico, cultural y artístico real español modaliza el ejercicio del derecho de propiedad constitucional de los mismos (art.33. CE), en atención a la naturaleza,*

---

<sup>1211</sup> ANGUITA VILLANUEVA, Luis A., 2006, pp.73-75.

<sup>1212</sup> ALVAREZ, ALVAREZ, José Luis, 2004, p.451.

<sup>1213</sup> NIETO GARCIA, A., *Los bienes comunales*, Madrid, Edersa, 1964, p.3.

*características o propiedades de las cosas (....) Estos bienes tienen un valor cultural innegable, que trasciende sobremanera la esfera individual de su titular para adquirir carta de naturaleza como interés colectivo que afecta a la generalidad de los ciudadanos. Podría decirse, incluso, que se trata de bienes de titularidad compartida o más bien de disfrute compartido o destino común, ya que en realidad no está en juego la titularidad dominical sobre los mismos, en sentido propio, sino su disfrute colectivo con el resto de la comunidad. Lo decisivo será, por tanto, atender a la utilidad y destino de los bienes objeto de tutela, en función a sus beneficiarios, y no a su titularidad pública o privada. En definitiva, lo que debe de ser objeto de especial consideración es que con la propiedad de los bienes culturales se satisface prioritaria y fundamentalmente intereses superindividualidades o colectivos de sus beneficiarios, por el uso social que le dictan sus cualidades objetivas, y no intereses individuales de su titular. El concepto liberal de propiedad caracterizado por ser un derecho libre, absoluto e individual, un poder o señorío único, pleno y absoluto sobre la cosa (art.348 CC), ha sido superado por nuestra Constitución (art.33). El derecho de la propiedad ya no es un derecho de corte liberal y de atribución personalista, sino que está enclavado constitucionalmente entre derechos y deberes de los ciudadanos (...) A diferencia de la concepción liberal de la propiedad, como el derecho a gozar del modo más absoluto de una cosa, su reconocimiento como derecho en el Estado Social se realiza tanto en función del interés del titular como de la comunidad. Lo que supone, por otra parte, el rechazo de la tesis liberal de lo que el dominio no se puede identificar a través de la finalidad, es decir, que es consustancial al derecho de la propiedad (liberal) la carencia de finalidad en su atribución (...) Dado que lo decisivo en el derecho de la propiedad no es la titularidad<sup>1214</sup>. Este es el momento de delimitar constitucionalmente la función social de propiedad sobre los bienes integrantes del Patrimonio histórico, cultural y artístico español (...) De ello se infiere claramente que la función social constitucional de la propiedad de los bienes integrantes del Patrimonio histórico, artístico y artístico real español (...) encuentra su sentido y conformación en hacer accesible a todos los ciudadanos el destino y disfrute compartido de dichos bienes, que constituyen un patrimonio común. La función social viene determinada por el uso, provecho o goce cultural<sup>1215</sup>.*

La cuestión no es fácil de discernir ya que incluso actualmente se han ido poniendo en entredicho la propia categoría jurídica del dominio público. Julio V. González García precisa que la polémica doctrinal sobre la naturaleza del dominio público en el ámbito de la doctrina española ha estado delimitada por dos matices bien diferenciados, como potestad pública o como manifestación del derecho de la propiedad<sup>1216</sup>. Tradicionalmente el dominio público se consideró como una forma clara de propiedad, especialmente a raíz de la inserción en nuestro país de la obra de Hauriou, por lo que algunos autores como Álvarez Gendín, lo definiría como una forma de propiedad especial privilegiada de los entes públicos, afectada a la utilidad pública, a un servicio público o a un interés nacional. El dominio público como título de

<sup>1214</sup> OROZCO PARDO, Guillermo; PEREZ ALONSO, Esteban J. pp.1371-139.

<sup>1215</sup> OROZCO PARDO, Guillermo; PEREZ ALONSO, Esteban J., p.146.

<sup>1216</sup> GONZALEZ GARCIA, Julio V. *La titularidad de los bienes de dominio público*, Marcial Pons, Monografías Jurídicas, 1998, pp.47 y ss.

intervención de los poderes públicos, la denominada concepción funcionalista del demanio, fue asimilado por la doctrina española desde la recepción de la obra de Phoudon, *que en la actualidad se consideraría como un título de intervención de que disponen los poderes públicos para conseguir garantizar el destino de servicio a los intereses generales del bien. Desde la perspectiva del Derecho Administrativo, lo único que le interesaría a los poderes públicos sería la función que puedan cumplir para los intereses generales (...) La diferente finalidad que orienta la Administración pública se traduce en que ésta lo que intenta es buscar potestades, ampliar el ámbito de lo público teniendo en cuenta los fines que motivan la demanización de cada categoría de bienes (...) Esta adquisición de potestades por parte de los entes titulares del dominio público tiene, asimismo, un fin determinado: han de ser utilizados como vía para que sirvan con objetividad a los intereses generales (...).*

En base a este planteamiento doctrinal, podríamos intentar delimitar una construcción jurídica del Patrimonio Monumental como Dominio Público en el ámbito español. Si analizaremos la situación actual parece que no cabe duda que en el ámbito de la doctrina española se ha ido imponiendo la concepción de identificar al Patrimonio Histórico-Artístico como un bien del dominio público<sup>1217</sup>. En principio la doctrina española aparece insertada en la concepción de considerar el Patrimonio Cultural en el ámbito de una manifestación de propiedad pública, por el que el Estado adquiere en propiedad como un ente dotado de prerrogativas adquisitivas<sup>1218</sup>. En esta línea estaría situado Garrido Falla, Álvarez Gendín, Villar Palasí, Roca y González Ubeda van a defender la tesis de estos bienes como de dominio público. Eduardo Roca señala que en el supuesto de bienes de la Administración cabe la afirmación indudable de que se trata de bienes demaniales, concurriendo las características subjetivas, objetivas y teleológicas que la doctrina asigna al dominio público (...). Álvarez Gendín subraya su naturaleza dominal pública<sup>1219</sup>, incluso Alfredo Gallego Anarbitare apunta como en el caso de los bienes muebles que formarían la pinacoteca del Museo del Prado, deja claro que puede ser clasificado correctamente como bienes de dominio público, habiendo nacido anteriormente como patrimonio privado del Rey, para vincularse después a la Corona y posteriormente con la publicación del Código Civil de 1889, adquiriría dicho régimen patrimonial<sup>1220</sup>. La concepción del Patrimonio Monumental como Dominio Público sería recogida a la vista de lo dispuesto en el artículo 1º 1 y 92, de la Ley del Patrimonio del Estado de 25 de abril de

---

<sup>1217</sup> Concepción Barrero Rodríguez señala la tesis sustentada por Álvarez Gendín en su estudio *Naturaleza dominal pública de los edificios y de los bienes muebles* y posteriormente en la obra *El dominio público de las cosas de arte y científicas* en el que se defiende la concepción de las obras de arte como bienes de dominio público, tesis que se adherirá algunos otros autores como Eduardo Roca o Parada Vázquez.

<sup>1218</sup> MARTÍN MATEO, R, 1966, p.54.

<sup>1219</sup> ALVAREZ GENDIN, *El dominio público*, Barcelona, 1956, p.118.

<sup>1220</sup> GALLEGO ANABITARTE, A. "Los cuadros del Museo del Prado" *Administración y Constitución*, Estudios en Homenaje al Profesor Mesa Moles, Madrid, 1981, p.309.

1964<sup>1221</sup>. Incluso en la esfera del Patrimonio Arqueológico, el artículo 44 de la Ley de 25 de junio de 1985 subrayaría el concepto demanial como propiedad pública de estos bienes específicos del Patrimonio Monumental.

Sin embargo, actualmente se ha ido delimitando una concepción funcionalista del demanio, como podemos apreciar en las tesis defendidas por Paradas, respecto a los bienes que integran el patrimonio cultural, hay que señalar en primer lugar que la Ley, a diferencia de lo que sucede con las aguas o las minas, no declara la inclusión de esta categoría completa de bienes en el dominio público, sino que, al igual que en el caso de los montes o de la propiedad del suelo, los vincula con independencia de su titularidad pública o privada a un sin fin de obligaciones de interés público. En esta circunstancia, es obvio que cuando el titular del bien es un Ente público se reúnen los dos elementos decisivos para su calificación como bien demanial: el ya dicho de la titularidad, y la afectación a fines de servicio público. Pero la cuestión se plantea cuando falta la primera condición por ser el bien histórico de titularidad privada ¿Estamos entonces en presencia de un bien privado o, dado que está afecto a un servicio o finalidad pública, debe considerarse como bien demanial? (...) el régimen de aquellos sólo tiene visos de ser explicado aceptando la existencia de una categoría intermedia entre la demanialidad y la propiedad privada: los bienes de intereses público (...) En definitiva, nos encontramos ante bienes de régimen jurídico sui generis, cuyo centro de gravedad no se sitúa en el régimen pertenencial que se une a la detentación de la cosa, sino en el determinado por su condición de bienes espirituales evocados a la fruición colectiva (...) <sup>1222</sup>. En una misma línea se encontraría la tesis de Barcelona Llop quien se interroga por su parte la naturaleza jurídica pública del Patrimonio Monumental: (...) Conviene que aludamos a la naturaleza jurídica de los bienes públicos que forman parte del Patrimonio Cultural ¿Son demaniales o patrimoniales? La pregunta es sencilla, pero la respuesta quizás no tanto. El legislador ha despejado las dudas a propósito de los bienes arqueológicos descubiertos con posterioridad a la entrada en vigor de la LPHE que son, según el artículo 44.1, de dominio público. Pero, ¿Y los demás bienes públicos integrantes del Patrimonio Cultural? Las leyes guardan silencio; en consecuencia, hay que aplicar el criterio general: serán demaniales si están afectados al uso o al servicio público y patrimonial en otros casos <sup>1223</sup>.

Una interesante síntesis sobre la cuestión lo aporta el estudio de Concepción Barrero: *la normativa sobre el Patrimonio Histórico-Artístico no ha calificado nunca a estos bienes en un sentido o en otro; ha sido la doctrina quien lo ha hecho, destacándose de forma mayoritaria por su configuración como bienes de dominio público. Los bienes culturales pertenecientes a una Administración Pública no pueden considerarse, sin más, demaniales, con base, exclusivamente, en su genérica adscripción al disfrute de toda la colectividad. Esta es una nota o*

<sup>1221</sup> MATEO MATEO, R., p.53.

<sup>1222</sup> PARADAS, Ramón *Derecho Administrativo. III. Bienes Públicos y Urbanismo*. Marcial Pons, 1989, pp.256-258.

<sup>1223</sup> BARCELONA LLOP, Javier "Patrimonio Cultural" en GONZALEZ GARCÍA, Julio V. *Derecho de los Bienes Públicos*, Valencia, 2005, p.999.

*característica de la que participan todos los bienes históricos en general (...) La idea de un Dominio Público como un régimen exorbitante articulado sobre principios opuestos a los que rigen la propiedad privada carece aquí de aplicación. Al quedar sometidos todos los inmuebles del Patrimonio Histórico a un mismo estatuto jurídico (...) puede indicarse que los inmuebles históricos pertenecientes a la Administración Públicas están capacitados para desempeñar diversas utilidades o funciones a favor de su titular; esto es, no son bienes que estén destinados de forma exclusiva a su contemplación y disfrute por parte de todos los ciudadanos (...). Un bien inmueble histórico puede ser de dominio público o patrimonial dependiendo del propio destino de la Administración le otorgue (...) En una sola idea puede sintetizarse el estudio precedente: la titularidad administrativa de un bien histórico no otorga a éstos el carácter de demaniales. La adscripción de los bienes de esta naturaleza al uso y disfrute de toda colectividad es nota común de todos ellos, con independencia de su concreta pertenencia pública o privada<sup>1224</sup>.*

## **2. La base metodológica del trabajo de investigación.**

Como ya se ha enunciado anteriormente, en la mayor parte de los trabajos realizados en el seno del Derecho del Patrimonio Monumental se ha ido delimitando una concepción más relacionada con la historiografía artística que con una metodología histórico-jurídica, por lo que a lo largo de este trabajo he propuesto una nueva perspectiva de análisis del problema tutelar del Estado y la defensa del derecho de la propiedad privada de los bienes en el seno de los regímenes liberales. Se irá abordando este análisis en la siguiente base metodológica:

- 1) Una perspectiva interdisciplinar a la hora de abordar la tutela pública del bien de interés histórico-artístico, que ayude a comprender aún más la concepción jurídica del bien a proteger, por lo que se huye de una concepción simplista descontextualizada.
- 2) Se ha ido incluyendo todo el amplio conjunto de normas que se van a ir produciendo durante este amplio periodo, no como un simple listado en el ordenamiento jurídico español, sino que se han ido clasificando y sistematizando en función del ámbito temático planteado.
- 3) Se ha tenido en cuenta el derecho comparado en el Estado Liberal a la hora de abordar el trabajo en cuestión, por lo que al mismo tiempo se ha ido recopilando de la manera sistemática aquellas normas trascendentales que incluso han tenido una trascendencia en el caso español.
- 4) La inclusión de casos específicos de aplicación del ordenamiento jurídico español se inserta en la línea metodológica interdisciplinar, donde se ha unido mi formación como historiador y como doctorando de derecho.

---

<sup>1224</sup> BARRERO, C., 1990, pp.369-385.



- 5) Al mismo tiempo se irá insertando algunas nociones sobre la evolución del concepto del derecho de la propiedad.

### **2.1. La elaboración de una conceptualización jurídica**

En las legislaciones contemporáneas se ha incluido un concepto jurídico aleable bajo la denominación de Patrimonio Cultural, abarcando un conjunto de bienes muebles e inmuebles con pretendido valor monumental que fundamenta su tutela, pero que en cierta medida es tan aleatorio como el propio concepto jurídico a que se refiere. Y es que hoy por hoy el concepto semántico de este topónimo no tiene una denominación común en todos los ordenamientos, ni siquiera en el caso español entre todas las comunidades autónomas por lo que nos encontramos con un bien jurídico impreciso de definir. De la misma manera, durante la etapa liberal, podemos observar una amplia indeterminación en el bien jurídico a proteger, por lo que hemos introducido un concepto aglutinador bajo la denominación de Patrimonio Monumental, que en sí mismo presenta una identidad precisa, y que al mismo tiempo lo he contrapuesto al de Patrimonio Cultural. De esta manera podemos afirmar como ya he intentado exponer en el desarrollo del trabajo tanto los bienes muebles e inmuebles que componen unos y otros como el propio fundamento jurídico del valor que intenta defender son claramente diferentes e incluso en algún momento determinados contrapuestos. En ningún momento he incluido el término Bien Cultural sino que utilizado el concepto de BIEN DE INTERÉS HISTÓRICO Y ARTÍSTICO, con una clara intención de diferenciación de intereses. Al mismo tiempo he incluido otros conceptos que aunque no son incluidos directamente por los ordenamientos jurídicos me ha servido en el uso semántico de este trabajo como son los conceptos de PATRIMONIO MONUMENTAL ESTAMENTAL y PATRIMONIO MONUMENTAL NO ESTAMENTAL, PATRIMONIO MONUMENTAL ECLESIASTICO, PATRIMONIO MONUMENTAL MUNICIPAL, PATRIMONIO MONUMENTAL MONARQUICO, PATRIMONIO MONUMENTAL DE DOMINIO PRIVADO, referentes a cada uno de las distintas modalidades que he intentado analizar en este trabajo de investigación.

### **2.2. La etapa escogida.**

Uno de los problemas a la hora de elaborar este trabajo de investigación ha sido la propia contextualización temporal escogida, en principio dedicado a los avatares de la etapa liberal en España, que por sus matices diferenciables ha supuesto una tarea compleja en el propio desarrollo temático. He creído conveniente incluir como precedente al propio tema en cuestión, las bases jurídicas de la tutela del Patrimonio Monumental que se fueron durante la etapa de la Ilustración, especialmente con los reinados de Carlos III y Carlos IV al incluirse en las disposiciones normativas que surge en este periodo los conceptos jurídicos que posteriormente heredaría el periodo liberal en nuestro



país. La problemática de abordar el desarrollo histórico del liberalismo en España se convierte en otro obstáculo a la hora de elegir la línea cronológica de este periodo, por lo que se puede justificar que se integre etapas históricas con personalidad propia la unifiquemos bajo la denominación común de liberalismo, pero siempre manteniendo presente la diferencia conceptuales que se pueden dar las etapas iniciales del liberalismo español de los primeros decenios del siglo XIX con el final del reinado de Alfonso XIII. He creído de este modo conveniente incluir el periodo del régimen militar de Primo de Rivera a pesar de que evidentemente no pertenezca al régimen liberal, pero muestra el final de un periodo que he intentado descubrir su evolución conceptual.

### **2.3. La introducción del derecho comparado del Patrimonio Monumental en el periodo del Estado Liberal.**

Es ineludible la existencia en el estudio de todo análisis de investigación de la construcción histórica de cualquier bien jurídico del ordenamiento español, la introducción de una reflexión sobre el derecho comparado, tarea que se hace más ardua cuando nos remontamos a etapas históricas anteriores a la legislación contemporánea. La inexistencia de una monografía sobre la construcción inicial del concepto jurídico del Patrimonio Cultural en el Estado Liberal, me ha llevado a intentar una recopilación de las principales disposiciones normativas que se fueron promulgando en este periodo. He incluido fundamentalmente los sistemas normativos franceses e italianos, al considerarlos la base primordial conceptual de la tutela del bien a analizar, y los que al mismo tiempo han significado una mayor impronta al ordenamiento español. A ellos he unido algunas disposiciones normativas del derecho hispanoamericano, especialmente el de México, Perú o Argentina, por su amplio desarrollo en torno a la tutela del Patrimonio Arqueológico. No quiero dejar de destacar la labor que realizó en este aspecto en 1905 Brown en su obra *Care of the Monuments*, donde intentó abordar el estado de la cuestión en un amplio número de países, por lo que constituye una interesante base documental, incluyendo la problemática que constituía el carácter absoluto del derecho de la propiedad privada a la hora de tutelar el Patrimonio Monumental por el propio Estado. De la misma manera debemos de resaltar en un plano más sectorial las recopilaciones llevadas a cabo por GGG en el ámbito italiano y las realizadas en torno a la etapa de la Revolución Francesa.

### **2.4. La elaboración de un apéndice documental.**

La elaboración de un apéndice documental de más de mil documentos es uno de los pilares de la elaboración de este trabajo, tanto desde una perspectiva de amplia recopilación tanto de documentos históricos como del corpus legislativo. En los últimos años se han ido realizando tanto desde la historiografía institucional hasta algunos campos del derecho, amplias recopilaciones de todo el ordenamiento jurídico, tanto el estatal como los

emanados de los sistemas autonómicos, como los realizados por José Luis Álvarez, especialmente a raíz de la actual ley de 1995. La mayoría de estos trabajos de recopilación han sido realizados con un fundamento cronológico, y en algunos casos había quedado apartado la sistematización de los mismos, por lo que se convierten en un puro repertorio cronológico que sirven más como base de datos. La ausencia de una recopilación del corpus normativo del legado monumental me llevó a recopilar todas las disposiciones normativas, independientemente su jerarquía, que abarcara el periodo cronológico tratado en este trabajo, que en cierta manera podía ser de hecho una aportación al estudio. Sin embargo, a medida que iba avanzado en el proceso investigador creí conveniente que la amplia información documental que pude ir recopilando darle un tratamiento clasificador. De esta manera, la sistematización documental ha sido una de las tareas más ardua de la presente investigación, al intentar clasificar el material documental no solamente desde una perspectiva sincrónica, que nos hubiera llevado a una simple recopilación de los mismos cuyo único factor de identidad hubiera sido el cronológico, sino que se ha insertado en función a los diferentes matices temáticos que en cada época se ha ido delimitando, en sintonía con el desarrollo del propio trabajo. El nexo del proceso sistematizador ha sido en todo momento la construcción de la tutela del Patrimonio Monumental en función a su régimen en el seno de los derechos patrimoniales, por lo que han sido clasificados toda la normativa en relación a la intervención del Estado sobre el propietario del mismo, sea la Iglesia, las Instituciones Públicas o los de dominio privado. Probablemente se hubiera podido pensar que se podría haber hecho con otros criterios como los puramente legislativos, en sintonía a un orden jerárquico del sistema normativo, o incluso obviando los informes de algunas instituciones, que en algunos casos podían obviarse en un trabajo jurídico. Sin embargo, la incorporación de documentos no estrictamente jurídicos en algunos casos me ha permitido darle una contextualización en la línea de la metodología interdisciplinar. El resultado ha sido la recopilación de más de mil doscientos documentos, base primordial del trabajo de investigación que presento.

## **2.5. La impronta de la historia del derecho de la propiedad.**

No ha sido en ningún momento el objetivo de este trabajo la elaboración de una historia del derecho de la propiedad en sí, sino que he ido incorporando todos aquellos aspectos que me ayudaran a comprender mejor el devenir paralelo de la concepción jurídica del Patrimonio Monumental. Sería imposible haber incluido todo los aspectos posibles de este ámbito investigador por lo que he me limitado a citar algunos casos que pudieran servir de apoyo al proceso evolutivo de la Propiedad Monumental, que abarcara desde las tesis que defendieran el carácter absoluto de la propiedad propio de la consagración del Estado Liberal, hasta las transformaciones que irían surgiendo en las convulsiones vividas en el enlace de los siglos XIX y XX. Al mismo tiempo he tenido en cuenta la problemática suscitada por la propiedad eclesiástica,

### **2.5. El carácter interdisciplinar de la investigación.**

En toda investigación científica debe primar el carácter interdisciplinar que en el caso que nos concierne se convierte en algo obvio, dado la multidisciplinidad del bien objeto de estudio como es el propio Patrimonio Cultural. De ahí que no hayamos obviado algunos conceptos en el campo de la Teoría de la Restauración, la Sociología, la Antropología, la Histoire del Arte, la Historia del Coleccionismo, la Museografía, Biblioteconomía o las propias Ciencias del Patrimonio.

### **2.6. Fuentes**

A la hora de elaborar el presente trabajo de investigación he ido utilizando dos variables propiamente dichas, las que podemos definir como fuentes directas, que como el mismo término alude harían referencias a aquellas que han ido dirigida a la propia esencia del propio corpus documental, y las indirectas las que han sido tratadas ya en anteriores investigaciones. Entre las fuentes directas quiero resaltar la utilización de la Gaceta de Madrid, las diferentes colecciones legislativas y los Informes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, así como la de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, como referente en el ámbito local. La utilización de la Gaceta de Madrid es un claro referente a todo investigador histórico-jurídico, en cuanto que contiene todas las disposiciones normativas más importantes desde 1677, que se le dota de un carácter oficial, pudiendo realizar una tarea de recopilación de todo el sistema normativo promulgado en el ordenamiento español en torno a la tutela del Patrimonio Monumental. Debo de resaltar la amplia labor de divulgación de la propia Gaceta que se ha hecho en los últimos años a raíz de su digitalización, lo que me ha permitido agilizar su consulta. De la misma manera la publicación digitalizada de la colección legislativa por la Fundación de Centros de Estudios Constitucionales de 1812 me ha permitido consultar todo el ordenamiento jurídico desde Fernando VII hasta los albores de la II República, realizando una amplia búsqueda de todas aquellas disposiciones normativas que he considerado vital en el transcurrir de esta investigación. Esta colección fue publicada en su momento por la Imprenta Nacional.

Conviene destacar los Informes elaborados por las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que en cierta manera encierra un carácter normativo al convertirse en las instituciones administrativas por antonomasia de la tutela pública del Patrimonio Monumental de nuestro país. En este sentido la lectura de un gran número de oficios, expedientes y minutas de oficios nos ha permitido incorporar a este trabajo como ejemplos de casos de aplicación de las disposiciones normativas que se habían promulgado en estos años, e incluso en sí misma encerraban importantes cuestiones jurídicas referentes al asunto que nos concierne, como fueron los conflictos institucionales de tutela y especialmente los referentes a

los de dominio. La digitalización de los Informes de la Real Academia de la Historia me ha facilitado el acceso directo de los mismos, por lo que en caso contrario me hubiera sido prácticamente imposible su estudio. He intentado hacer una labor de selección, en función de las cuestiones jurídicas planteadas, deteniéndome especialmente en las declaraciones de monumentos, donde se cuestionaba en muchos casos los problemas que podía conllevar al propio inmueble dicha clasificación, todas las cuestiones relacionadas con el régimen de las excavaciones arqueológicas, de lo que he podido entresacar algunos casos de sumo interés y los conflictos suscitados en las transformaciones urbanísticas llevadas a cabo a lo largo del siglo XIX, donde se puede observar la actitud de la Real Academia de la Historia en algunos derribos de bienes inmuebles que hoy consideraríamos digno de protección. Al mismo tiempo he intentado hacer una labor de transcripción de los propios documentos. A estos informes cabría destacar los documentos que he podido consultar en los Archivos de la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y la Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

Como fuente directa creo que también podría incluir las llamadas fuentes literarias, tanto las que procederían directamente de las obras de autores reconocidos en el ámbito de la literatura española, como los procedentes de las revistas y periódicos a uso en este momento. De las primeras debemos resaltar la labor de los llamados libros de viajes que fueron elaborando aquellos viajeros ingleses y franceses especialmente que reflejaron como nadie la situación patrimonial que en este momento se estaba viviendo en nuestro país, tanto en el ámbito de la sensibilidad artística como del mercado. Al mismo tiempo autores como Benito Pérez Galdos, Victor Hugo, Goethe Balzac o Guy de Maupassant dejaron testimonios de los despojos artísticos que se produjeron durante estos años e incluso referencia de sus propias concepciones en el ámbito del régimen patrimonial de estos bienes, por lo que he incluido algunos textos de los mismos, que me ha llevado a una contextualización del problema a tratar. De la misma manera en el ámbito local he ido introduciendo los testimonios de una legión de eruditos que dejaron un amplio testimonio en sus escritos de la cuestión y que incluso sus opiniones referente a la tutela pública del Patrimonio Monumental, especialmente en el ámbito privado, pudieron influir a la hora de ir configurándose un verdadero sistema normativo español, como fueron los casos de Rodrigo Amador de los Ríos, Demetrio de los Ríos, José Gestoso; Mateos Gago y otros, que por cierto muchas de sus obras siguen estando en el baúl de los recuerdos en la Biblioteca Universitaria Hispalense. He podido contar con un nuevo campo digitalizador como ha sido el caso de la Hemeroteca Digital, lo que me ha permitido incluir algunos artículos que fueron publicándose en revistas de crítica de arte, de viajes donde un gran número de eruditos pudieron expresar todos los problemas generados en relación con la situación crítica que se estaba viviendo en este momento referente a la tutela pública del Patrimonio Monumental. La revista *la Ilustración española* y

Americana, la Alhambra, Arquitectura, el Artista, entre otras me ha ayudado a contextualizar todo el proceso de investigación. Otra de las fuentes vitales a la hora de poder analizar los procesos de configuración del ordenamiento jurídico de tutela del Patrimonio Monumental ha sido el análisis realizado sobre los debates producidos en el Senado y en el Congreso desde la etapa del primer constitucionalismo hasta el régimen militar de Primo de Rivera, que encierran un amplio soporte documental que he intentado recoger. Debo de resaltar también la labor de digitalización de los mismos que nuevamente ha permitido un fácil acceso a su estudio.

Como Fuentes Indirectas he considerado al amplio bagaje documental que he entresacado de los innumerables artículos y libros que ha consultado como referente a las cuestiones planteadas en este trabajo de investigación. Dentro de los mismos se han entrecruzados trabajos de historiadores del arte con historiadores del derecho o pertenecientes al derecho administrativo y civil, cuyo resultado he intentado que sea una labor de síntesis.

---

## ***CAPÍTULO I. LA AMBIGÜEDAD DEL CONCEPTO JURÍDICO DEL PATRIMONIO MONUMENTAL EN EL ESTADO LIBERAL Y SU PROYECCIÓN EN EL ÁMBITO ESPAÑOL.***

---

### **1. La construcción del concepto de Patrimonio Monumental en el ámbito del Estado Liberal.**

#### **1.1. A modo de introducción: el Patrimonio Cultural como reflejo de la identidad de una sociedad.**

Uno de los problemas que debemos abordar en el análisis de la protección legal del patrimonio es el contenido semántico del objeto de su protección: su propia conceptualización. El Diccionario de la Real Academia señala que el patrimonio está formado por bienes o haciendas que una persona ha heredado de sus ascendientes, a lo que añade lo que engloba como *bienes propios adquiridos por cualquier título*. En este sentido, al hablar de patrimonio cultural nos estaríamos refiriendo *al conjunto de bienes materiales legados por los antepasados*<sup>1225</sup>. No obstante han sido las aportaciones de la Sociología y de la Antropología las que han ido delimitando el contenido semántico del concepto de Patrimonio Cultural<sup>1226</sup>. Para los sociológicos cuando se refiere a la dimensión cultural de una sociedad se refiere Sin embargo, es realmente el campo de la antropología la que fue abriendo camino en la matización del concepto, al concretizar el contenido semántico de los términos cultura y patrimonio cultural. Si entendemos por cultura en los términos que el evolucionista Tylor definía como *todo complejo que incluye conocimiento, creencias, artes, normas éticas, leyes, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad*<sup>1227</sup>, el patrimonio cultural sería los vestigios materiales que resumen la identidad de una sociedad concreta, que le da fundamento. No todas las sociedades humanas son conscientes de que poseen un patrimonio cultural determinado. Para ello tiene que darse las condiciones que los antropólogos definen como *conciencia del pasado*, la conciencia del paso del tiempo, que aunque es un carácter peculiar de los seres humanos, no todas en todas las sociedades se desarrolla de la misma manera. De ahí que Umberto Eco puntualice que *es la memoria del pasado la que nos dice porqué nosotros*

---

<sup>1225</sup> Sobre el concepto de Patrimonio a modo de síntesis cabe mencionar BABELON, Jean Pierre; CHASTEL, André La noción de patrimonio en *Revue de L'Art* 49, París, 1980; DESVALLEES, André *Emergence et cheminements du mot patrimoine* en *Musées*, 208, París, 1995.

<sup>1226</sup> Una interesante exposición sobre la impronta de la Antropología y la Sociología y su impronta en el mundo del Derecho lo encontramos en LOPEZ BRAVO, Carlos *El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales*. Sevilla, 1999, pp.21-28.

<sup>1227</sup> Una interesante recopilación sobre los distintos enfoques que las distintas corrientes antropológicas han aportado sobre la concepción de la cultura, ROSSI, Ino; O'HIGGINS, Edward *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*. Barcelona, 1981.



*somos lo que somos y nos confiere nuestra propia identidad*<sup>1228</sup>. Como apunta Ballart *la conciencia humana en sociedad ha desarrollado dos nociones de tiempo, la del tiempo que pasa y la del tiempo que perdura. La conciencia del tiempo que pasa es propia de culturas complejas y lleva directamente a la idea de historia. En cambio, la conciencia del tiempo que perdura, que se da en sociedades menos complejas, lleva al presente eterno, una especie de no tiempo que aparece en los mitos y en ciertas narraciones (...)*<sup>1229</sup> Con la conciencia de la historia *los individuos y los grupos manifiestan una voluntad expresa de trascender, poniendo en relación el pasado con el futuro*<sup>1230</sup>. Esa conciencia de pasado se ira haciendo presente en función del contexto socioeconómico y el ámbito cultural, al considerar la existencia de un bagaje perteneciente al pasado que le da identidad: es lo que los antropólogos definirían como Cultura Material, que se podría designar el conjunto de materiales que esa sociedad humana ha ido produciendo a lo largo de su historia. El objeto material se convierte en un verdadero referente para la propia existencia humana, por lo que se va configurando una concepción patrimonial que en palabras de Ballart *alimenta en el ser humano una sensación reconfortante de continuidad en el tiempo y de identificación con una determinada tradición*.

No todo los bienes configurarían el patrimonio cultural de una sociedad por lo que se presenta un problema en el seno de una sociedad a la hora de elegir que un bien, sea mueble o inmueble, se considere como parte del patrimonio cultural de una sociedad, ya que cualquier elemento perteneciente a la misma puede considerarse patrimonio. Es el proceso de *Selección Patrimonial*, que dependerá de la contextualización en que este inmerso dicha sociedad, por lo que siguiendo a Joseph Ballart Hernández y Jordi Juan i Tresserras, tendría que dependerá del valor que la sociedad delimite al bien cultural, *el que se escogerían en función del valor que la sociedad delimite al bien cultural; valor en sentido de valía, es decir, de percepción de cualidades estimables en una cosa, no de valor en un sentido teotérico o meramente especulativo. Es lo que se conoce como la axiología patrimonial*<sup>1231</sup>. *No es por tanto siempre un valor intrínseco, sino que estará determinado por la manera de percibir que tendrá la sociedad y por lo tanto dependiendo nuevamente del contexto sociocultural en que este inmerso*<sup>1232</sup>. Siguiendo a Ballart, los

---

<sup>1228</sup> ECO, Umberto *¿solo puede construirse el futuro sobre la memoria del pasado?* en *¿por qué recordar?* Foro Internacional Memoria e Historia, UNESCO, 25 de marzo, Barcelona, 1999, p.184.

<sup>1229</sup> BALLART, J. *El patrimonio histórico y arqueológico: Valor y uso*. Barcelona, 2002. p.30.

<sup>1230</sup> BALLART, 2002, p.31.

<sup>1231</sup> Ballart Hernández, Joseph; Tresserras, Jordi Juan *Gestión del patrimonio cultural*. Barcelona, 2001. pp.18-19.

<sup>1232</sup> En palabras de Joseph Ballart, *los contextos de atribución del valor se configuran en torno a circunstancias muy determinadas, tales como: las relaciones económicas dominantes, las ideas y creencias sociales, las presiones políticas, etc, pero también en función de las estructuras de la investigación científica teórica y aplicada, la provisión para la formación en*

*contextos de atribución del valor se configuran en torno a circunstancias muy determinadas, tales como: las relaciones económicas dominantes, las ideas y creencias sociales, las presiones políticas, etc, pero también en función de las estructuras de la investigación científica teórica y aplicada, la provisión para la formación en los ámbitos de las ciencias sociales, las posibilidades de la financiación del Estado, y los agentes sociales y económico*<sup>1233</sup>. El valor de un bien apunta Ballart *se realizará en el sentido de aprecio hacia determinados objetos por el mérito que atesoran, por la utilidad que manifiestan, o por su actitud para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar. Por todo eso el valor no es siempre inherente a las cosas, a los objetos (...) antes bien, se trata de una cualidad añadida por las personas, que puede crecer o disminuir, y que lo hace estimables. Se trata, pues, de un concepto relativo sometido a los vaivenes de la percepción y del comportamiento humano y, por lo tanto, dependiente de un marco de referencias intelectuales, históricas, culturales y psicológicas que varía con las personas y los grupos que atribuyen valor*<sup>1234</sup>. Cada bien comprenderá una serie de valores: 1º) de uso, en tanto que sirva para satisfacer alguna necesidad concreta, es asimilable a los valores económicos e informativo científico; 2º) un valor formal, por lo que evaluamos el bien en función a la atracción que despierta en los sentidos, es lo que llamaríamos el valor estético y 3º) un valor simbólico, al servir el bien de nexo con los acontecimientos del pasado<sup>1235</sup>. Las circunstancias sociales y culturales serán las que le darán más impronta a una u a otra. Siguiendo a Francesca Tugores *la selección de los bienes culturales que deben de pasar a la posteridad implica un juicio de valor, que se realizará siempre desde una perspectiva cultural concreta. Históricamente, se ha dado más valor a los productos de actividades creativas y a aquellos procedentes de las clases sociales privilegiadas, especialmente las obras de arte, y se ha considerado como patrimonio menor a los objetos de tipo utilitario o a los producidos por las clases mas*

---

*los ámbitos de las ciencias sociales, las posibilidades de la financiación del Estado, y los agentes sociales y económicos.*

<sup>1233</sup> Ballart Hernández; Tresserras, 2001, p.19.

<sup>1234</sup> BALLART, Josep *El patrimonio histórico arqueológico: Valor y uso*. Ariel Patrimonio, Barcelona, 2002, p. W. D. Lipe sugiere que el valor de un bien se irá perfilando en torno a circunstancias centradas en las relaciones económicas, los criterios de grupos dominantes, las creencias e ideas mayoritarias, las formas y estructuras de la investigación en ciencias sociales y humanas, etc. De ahí que distinga una serie de valores que un bien puede ir asumiendo, por lo que distingue de un *valor económico* del bien, determinado por los factores del mercado, donde el bien es visto como un recurso utilizable; un *valor estético*, que está determinado por los gustos imperantes en el contexto social e incluso relacionada con la psicología de los individuos receptores del bien; un *valor informativo*, donde en el objeto o bien se aprecia un referente documental que expresan cosas sobre las personas y sociedades que la crearon y un *valor ideológico* que expresa sentimientos subjetivos u emotivos, bien de referencias políticas, legitimando la posición de poder de un grupo u estamento social o bien con referencias religiosas o espirituales. LIPE, William D. *Value and meaning in cultural resources* en CLEERE, H. (ed.), *Approaches to the archaeological heritage*, Cambridge, N. Y., Cambridge University Press, 1984, pp.1-11.

<sup>1235</sup> Una amplia exposición sobre los valores del patrimonio, Ballart, 2002, pp.62-89.

*desfavorables, que hoy consideramos igualmente valiosos por la información de que son portadores*<sup>1236</sup>.

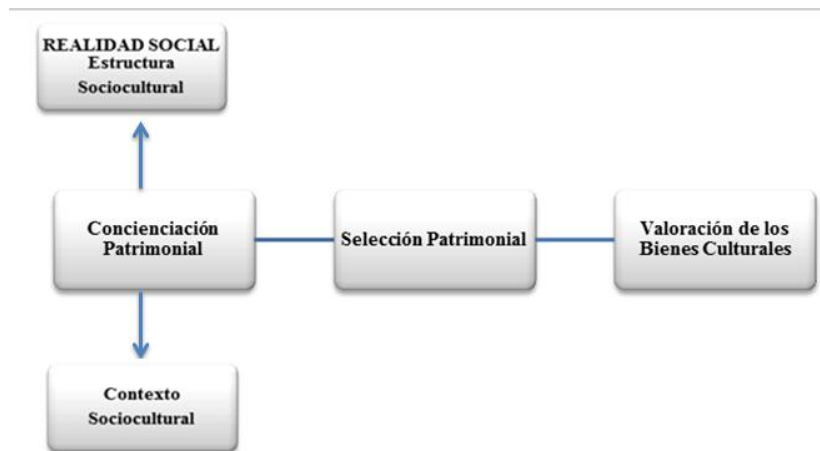
Una vez concretizado los bienes perteneciente que se quiere proteger, lo que hemos denominado selección patrimonial, la sociedad actuara institucionalmente bien a través desde los propios sectores privados o desde los poderes públicos. Es lo que se denomina por la moderna museografía como gestión del patrimonio, entendidas como *el conjunto de actuaciones programadas con el objeto de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de esos bienes adecuados* que en las sociedades contemporáneas se pasa de la superación de las concepciones tradicionales, especialmente en el periodo decimonónico, que se limitaban el cuidado o la tutela de los bienes patrimoniales a la posibilidad de una política integral que se plantea no solamente conservar sino encontrar los mejores usos para el patrimonio cultural. La necesidad de conservación nacería desde las primeras civilizaciones urbanas del Oriente Próximo, y se prolongaría en la cultura occidental desde el ámbito grecolatino hasta el siglo XIX. Pero no sería hasta el periodo de las Revoluciones Liberales cuando el conservadurismo se institucionaliza apareciendo plenamente los conceptos de patrimonio histórico y de bien cultural, que pronto tendría una plena respuesta jurídica que se plasmará en el desarrollo de una normativa, que será el resultado final del proceso anteriormente descrito, es lo que podríamos llamar la etapa de la institucionalización del patrimonio. Como apunta Javier Hernando *a medida que va tomando entidad el patrimonio histórico-artístico, y por tanto se constituye como cuestión de amplia repercusión social, el Estado respondiendo con diversas medidas, que no tiene que ser definida como ley (...)*. El tratamiento jurídico dependerá no solamente al interés estético que despierten, sino también al interés social, económico y simbólico que se les atribuye desde el poder<sup>1237</sup>. El contenido normativo irá paulatinamente recogiendo los bienes que configuran el patrimonio (que en principio solamente serán aquellos que contengan unas raíces históricas), las instituciones encargadas de la protección legal del patrimonio, y las medidas proteccionistas. Por consiguiente, un bien inmueble concreto, como por ejemplo, una catedral, comenzará a ser identificado como un ente a conservar (*Proceso de concienciación patrimonial*) en el momento en que se de las circunstancias socioeconómicas y culturales para que sea seleccionado como digno de protección (*Selección Patrimonial*), por lo que dicho bien la sociedad le dará un valor determinado en función a su vez del contexto sociocultural en que nos encontremos (*Valoración Patrimonial*), que llevará a la sociedad a tutelar su protección mediante los instrumentos jurídicos. Este bien patrimonial de carácter histórico

---

<sup>1236</sup> TUGORES, Francesca; PLANAS, Rosa *Introducción al patrimonio cultural*. Gijón, 2006. p.23.

<sup>1237</sup> GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier *Legislación sobre Patrimonio Histórico*, Madrid, 1987.

en este momento habrá cobrado un valor jurídico al ser tutelado por las instituciones públicas mediante una norma jurídica.



### NIVEL DE PROTECCIÓN JURÍDICA



No cabe duda que será con el Estado Liberal cuando se va ir desarrollando una construcción jurídica del Legado Patrimonio como objeto de la tutela pública, que va a ir superando una mera lectura metajurídica, tanto en su ámbito seleccionador como en el fundamento valorativo que le va a dotar de un verdadero contenido jurídico. A pesar de ello, la ambigüedad va a definir en terminos generales la delimitación del concepto jurídico del Patrimonio Monumental como objeto tutelar público, el llamado Monumento Historico-Artístico, al reducir la selección patrimonial y parcializar el hecho cultural a la conveniencia del propio Estado. De ambiguo podríamos definir la conceptualización jurídica del bien objeto de protección que en este caso desde denominamos Patrimonio Histórico-Artístico o Legado Patrimonial, ya que el Estado Liberal fue incapaz de configurar un término unívoco que enunciara su identidad jurídica. Sin embargo, es obvio que en la actual legislación contemporánea a pesar de que se ha ido adaptando el uso del término Patrimonio Cultural o Bien Cultural, todavía en algunas legislaciones nacionales se sigue utilizando el término Patrimonio Histórico, que ha sido objeto de crítica por alguna parte de la doctrina. Las causas que podemos

apreciar en la configuración del término son múltiples, desde una falta de sistematización del conocimiento científico del legado patrimonial, problemas de designación de los bienes que lo comprende hasta una lectura semántica diluida en criterios subjetivos, que desbordaba lo puramente jurídico. El término más utilizado tanto en la doctrina como en el ordenamiento sería el de Monumento Histórico-Artístico Nacional, que supone claramente un paso importante en la construcción de la figura jurídica del legado Patrimonial, a pesar de que tanto el contenido semántico como el bien que se intenta proteger no está exento de polémica doctrinal, al cambiar en función a los distintos ordenamientos jurídicos del Estado Liberal. No cabe duda que la utilización del concepto Monumento durante esta etapa supone la sustitución del concepto de Antigüedades, de tradición renacentista y barroca, que se apreciaba en las distintas normativas promulgadas desde el periodo humanista bajo los auspicios de los Papas hasta la etapa de la Ilustración, y otras, aunque de menor referencia como Ruinas. Si analizamos ambos términos, Antigüedades y Monumentos, podríamos pensar que indistintamente designan el mismo concepto patrimonial, pero un análisis más exhaustivo nos lleva a delimitar dos entidades diferentes tanto en su denominación como en su contenido semántico. El concepto de Antigüedades va a ser utilizada en principio por el Humanismo Renacentista al descubrir una valoración patrimonial fundamentada en aquel conjunto de bienes que emulaban el mundo clásico. Eran los anticuarios los encargados de analizarlos y de divulgarlos, surgiendo una verdadera comunidad intelectual cuyo objetivo sería el análisis del mundo clásico. La Antigüedad Clásica es un verdadero testimonio del pasado, una emulación de tiempos lejanos que se añoran por sectores cultos de la sociedad, que legitiman a un mismo tiempo un poder político como un ideal estético. El Monumento aportará una selección y una valoración patrimonial que va más allá de lo puramente clásico.

	<b>Concepto Jurídico del Legado Patrimonial</b>
<b>Monarquía Absoluta</b>	Antigüedades Clásicas
<b>Ilustración</b>	Antigüedades / Monumentos Históricos-Artísticos
<b>Estado Liberal</b>	Monumentos Históricos-Artísticos Nacionales/ Tesoro Nacional

La acepción del término Monumento Histórico-Artístico iría adaptándose a lo largo del siglo XIX, no como una concepción unívoca, con identidad jurídica propia, ya que su sentido semántico variaba según los casos,

e incluso la utilización de los epítetos artístico, histórico o nacional. El término Monumento en principio podía referirse exclusivamente a las obras arquitectónicas, pero en realidad se fue ampliando a todo tipo de objetos y bienes que tuviese relevancia a la hora de formar parte del legado patrimonial. Algunos países utilizarían exclusivamente el término Monumento como serían los casos de Austria (Ley Federal para la protección de los monumentos de 23 de septiembre de 1923) o Bélgica (Ley sobre la conservación de monumentos o lugares de 7 de agosto de 1931. En otras ocasiones se le irá añadiendo un adjetivo, que puede ser histórico, artístico o nacional, aludiendo los intereses adheridos al bien a proteger. En el caso de la legislación francesa e italianas, va a ser constante la utilización del término Monumento Histórico, así en la Ley de 1870 como en la Ley del 13 de diciembre 1913. La legislación italiana incorpora una nueva figura jurídica con la promulgación de la Ley de 1939, la cosa de interés histórico y artístico, precedente del concepto de bien cultural adaptado en la segunda mitad del siglo XX. La legislación hispanoamericana que se fue configurando desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX también utilizaría el término Monumento, aunque con un matiz más arqueológico que histórico.

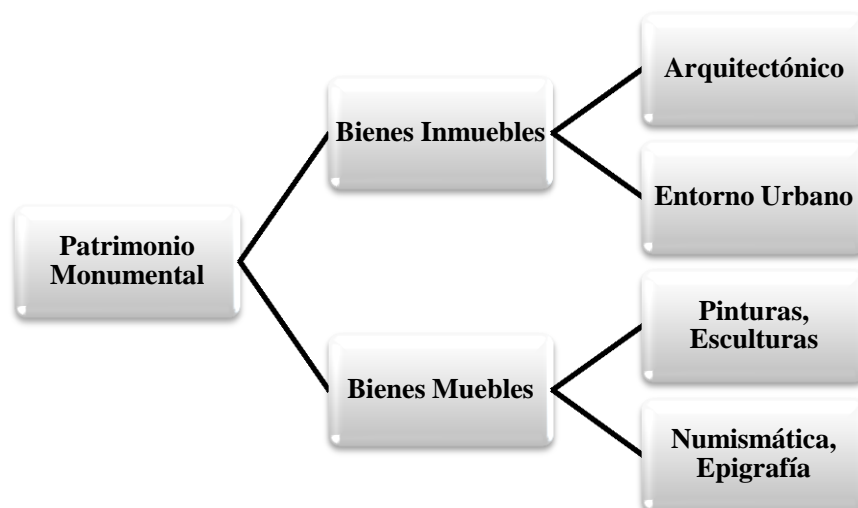
## **1.2. Los bienes configuradores del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal: La dicotomía bienes muebles e inmuebles en la configuración del Patrimonio Monumental.**

La clásica distinción en la tradición jurídica de distinguir los bienes en muebles e inmuebles tiene su proyección en el sistema normativo del Patrimonio Monumental, que va a dar como resultado una distinción en el modelo tutelar de dichos bienes. En opinión de Dionisio Fernández de Gatta los bienes inmuebles en el ámbito del Patrimonio Monumental cuentan con una amplia tradición normativa, destinada a su producción; la cual refleja sin duda, al importancia histórico-cultural que el legislador y el ordenamiento dan a tales bienes; destinándose, por ello, múltiples técnicas a su protección. En contraposición con estos, los bienes muebles han sido objeto de mucha menor atención, incluso se puede hablar de un cierto descuido. De hecho, algunas medidas y técnicas de protección de los bienes muebles se crearon y pusieron en marcha en relación con los bienes inmuebles. Victoria Quirosa García señala la movilidad como principio constitutivo del concepto del bien mueble: *Por diversos motivos, estos bienes no tenían una definición propia, frente a lo que nos encontramos con deficiones parciales, apreciaciones legislativas que intentaban suplir esta carencia o el tratamiento excluyente que se había venido haciendo en relación con los bienes inmuebles. Definiciones que no contribuían a la caracterización de estos bienes culturales, ni incidían en un criterio que se alza como el principal exponente de este tipo de bienes, y que así los define etimológicamente, nos referimos a la movilidad; principal elemento que los unifica a todos y determina su naturaleza patrimonial, que por otra parte ha sido el criterio diferenciador respecto a los inmuebles*<sup>1238</sup>. Ya en la propia doctrina del Estado Liberal en torno al Patrimonio Histórico-Artístico se precisa tal distinción de bienes muebles e inmuebles: *(...) There is the further división between movable and immovable objects, while the French Monument Act of 1887 subdivides the last into 'immovables by nature' such as buildings or tumuli, and*

<sup>1238</sup> QUIROSA GARCIA, M<sup>a</sup> Victoria *Evolución de la tutela de los bienes culturales muebles en España: S.XVIII-XXI*, Granada, 2008, pp.13-14.



*‘immovables by destination’ such as altars in churches, which might be, but are never meant to be, shifted from their places. Movable objects may be of historical interest, like documents, or of artistic interest, like cameos, or may be, like illuminated manuscripts or Greek coins, at once historical and artistic. Movable natural objects may be caught in the net of the monument legislator, for it is as important to prevent all the primrose roots being extirpated from a wood, as it is for the trees of the wood to be left standing. The chief immovable objects are buildings, including the rude stone monuments of prehistoric times.*



### **1.2.1. Los bienes inmuebles de interés histórico y artístico: De la individualidad del inmueble histórico a la invención del Patrimonio Urbano.**

#### **- El Patrimonio Arquitectónico.**

No cabe duda que el Patrimonio Arquitectónico se consideraba en el Estado Liberal como el conjunto de bienes que por su propia naturaleza había que conservar con una máxima protección. Sin embargo, a medida que vaya avanzado el largo periodo del Estado Liberal la concepción de la arquitectura irá cambiando no solamente por las nuevas prácticas de la construcción con la incorporación de las vanguardias, sino también por la mirada que se le va a ir dando a la arquitectura del pasado histórico. Al mismo tiempo el proceso de selección y valoración irá siendo ampliado e irá enriqueciendo la amplitud del concepto jurídico a proteger. ¿A que llamamos Patrimonio Arquitectónico en el Estado Liberal? En las historias de las clasificaciones de las artes, la consideración de la arquitectura fue pasando por varias fases. Durante la etapa clásica y la Edad Media, la arquitectura se encontraba en el conjunto de las artes mecánicas, siendo ya en el Renacimiento cuando se consideraría una de las artes principales. La arquitectura se incluiría en la segunda mitad del siglo XVIII entre las bellas artes, dotándole de una preceptiva académica, aunque solo se la aplicaría a las construcciones monumentales. Las construcciones monumentales se consideran resultados de una actividad artística, por lo que su creatividad tiene que estar reglada, al mismo tiempo que deben ser conservados aquellos edificios que representen una simbología estética de etapas anteriores. Una primera aproximación lo podríamos encontrar en una fecha temprana, 1753, cuando se

publica en París el *Essai sur l'Architecture*, y una segunda edición que saldría dos años después, en 1755, firmado por el abad Marc-Antonie Laugier, considerado por la historiografía contemporánea como uno de los tratados más significativos de la arquitectura contemporánea, donde ya se define a la arquitectura como *de todas las artes útiles, la que exige las aptitudes más brillantes y los conocimientos más amplios. Quizás sea necesario tanto genio, espíritu y gusto para formar un gran arquitecto como para formar un pintor y un poeta de primera línea. Es un error creer que en arquitectura todo se reduce a mecánica, todo se limita a cavar cimientos, a levantar muros (...) Cuando se habla del arte de construir, todo lo que la mente del arte de construir, todo lo que la mente del vulgo alcanza a imaginar son montones desordenados de molestos escombros (...) Es la corteza poco agradable de un arte cuyos ingeniosos misterios, que poca gente aprecia, despiertan la admiración de quien los penetran (...) La visión de un edificio construido en toda la perfección de su arte causa un placer y un entusiasmo del que no es posible defenderse (...)*<sup>1239</sup>.

En la segunda mitad del siglo XIX, la arquitectura dejaba de ser simplemente un mero arte, y comienza a germinar un marco ideológico en la que se identificará las obras arquitectónicas con su carácter monumental. La mentalidad romántica aportaría una nueva mirada a la arquitectura, Víctor Hugo afirma que *la arquitectura es el gran libro de la humanidad* y la ciudad una crónica de piedra. Hegel al hablar de la arquitectura, la consideraba un arte, pero inmediatamente percibe una naturaleza diferente. Lo que caracterizaba las creaciones arquitectónicas era el hecho de que eran hechos que se convertían en simples medios para satisfacer unos objetivos exteriores al arte, por lo que sostenía que la arquitectura era un arte simbólico, por lo que tenía una finalidad diferente a la finalidad esencial del arte, por lo que deducía que la arquitectura era algo distinto de arte<sup>1240</sup>. La arquitectura como recuerdo/Memoria de un colectivo, por lo que se identifica como Monumento, como podemos apreciar en la obra de Quatremère de Quincy al definirlo como un edificio construido sea para eternizar el recuerdo de cosas memorables, sea concebido, edificado o dispuesto para llegar a ser un agente de embellecimiento y de magnificencia en las ciudades. John Ruskin daría la clave en 1849 a la hora de exponer la causa de protección pública del legado arquitectónico: *Se haya oído o no, no debo dejar de exponer la verdad, esto no es, una vez más, una cuestión de conveniencia o sensación de si hemos de conservar los edificios del pasado o no. En cualquier caso, no tenemos derecho a tocarlos. No son nuestros. Pertenecen en parte a aquellos que los construyeron y en parte a todas las generaciones de la humanidad que nos seguirán*<sup>1241</sup>. La renovación de la arquitectura occidental será un hecho a principios del siglo XX con el triunfo de las vanguardias arquitectónicas, los comienzos de una historiografía científica de la arquitectura y la profesionalización de la figura del arquitecto, y la creación de las Escuelas de Arquitectura. Se produce una nueva visión en la práctica arquitectónica marcada por la utilidad que ira primando sobre su concepción puramente artística. Adolf Loos afirmaría en 1910 sobre el concepto arquitectónico: *Por tanto, ¿no será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no debiera contarse entre las artes? Así es. Sólo una parte, muy pequeña, de la arquitectura corresponde al dominio del arte: el monumento funerario y conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene una finalidad hay que excluirlo del imperio del arte*<sup>1242</sup>. Le Corbusier sería tajante al definir que *La arquitectura se encuentra ante un código alterado. Las innovaciones constructivas, son tales, que los viejos estilos, de los cuales padecemos la obsesión, no pueden ocultarlas (...) Hay una novedad en los ritmos, en las formas,*

<sup>1239</sup> LAUGIER, Marc-Antoine Ensayo sobre la arquitectura Akal. Fuentes de Arte, 14, 1753/1999. Edición de Ilija Maure Rubio.

<sup>1240</sup> HEGEL, G.W.F. *La arquitectura*, Barcelona, Kairos, pp.32 yss.

<sup>1241</sup> El texto de Ruskin esta insertado en GOMBRICH, Ernest ¿porqué conservar los edificios históricos?, *Composicion arquitectónica*, 2 de febrero de 1989, pp.116-138.

<sup>1242</sup> LOOS, Adolf *Arquitectura*, 1910, en Ornamento y delito y otros escritos. Barcelona, Gustavo Gili, p.229.

*proporcionada por los procedimientos de construcción (...) Los estilos no existen ya, están fuera de nosotros; si nos acosan aún, lo hacen como los parásitos. Si uno se coloca de cara al pasado, constata que la vieja codificación de la arquitectura, recargada de artículos y de reglamentos durante cuarenta siglos, deja de interesarnos y ya no nos concierne. Ha habido una revisión de valores, ha habido una revisión en el concepto de la arquitectura<sup>1243</sup>. La reivindicación del concepto espacial de la arquitectura lo defendería Bruno Zevi: Si bien en la arquitectura podemos encontrar las contribuciones de las demás artes, es el espacio interno, el espacio que nos circunda y nos incluye, el que da el la en el juicio sobre un edificio, el que constituye el sí o el no de cualquier sentencia estética sobre arquitectura (...) La arquitectura no es tan solo arte, ni solo imagen de vida histórica o de vida vivida por nosotros o por los demás; es también en primer lugar, el ambiente, la escena en la cual se desarrolla nuestra vida<sup>1244</sup>.*

La cuestión de la utilidad provocó una revisión en la concepción conservacionista del edificio histórico, que hay aunque sigue concibiéndose como bienes que hay que conservar y preservar, se inserta una nueva axiología, en la que se intenta incorporarlos a la nueva realidad. De esta manera un gran número de edificios del pasado histórico que habían perdido su función original van a ser rescatados para nuevos usos, por lo que antiguos conventos, palacios o iglesias, dejan de ser meros objetos de deleite o testimoniales de un pasado histórico, sino que se insertará en el presente con una distinta funcionalidad por las que se realizaron. El proceso se iniciaría con la Revolución Francesa y llegaría hasta nuestros días, siendo en algunos momentos criticados al provocarse un efecto de descontextualización del edificio, al perder su esencia inicial, su objeto por lo que se construyó, pero en realidad fue la única vía real para su pervivencia. A pesar de esta consideración, la arquitectura abriría nuevas concepciones a raíz de la II Guerra Mundial que el Estado Liberal no lo contemplaría como elementos patrimoniales, arquitecturas menores, como construcciones rurales, caseríos, viviendas rústicas, que la legislación del patrimonio iría incorporando a sus textos normativos. Obviamente, la llamada arquitectura industrial propio del paisaje arquitectónico surgido en los albores de la industrialización no se consideraría digna de protección al no representar valores del pasado, a lo que se uniría la propia arquitectura vanguardista, funcional que nace en la crisis del Estado Liberal a comienzo del siglo XX, pero que no sería contemplado como legado patrimonial para un futuro, al igual que ocurriría en el caso de la pintura y escultura contemporánea. ¿Qué arquitecturas del pasado hay que proteger? La selección y valoración del Patrimonio Arquitectónico van a estar presidido por los ideales del Historicismo-Nacionalismo que van a estar presente en la sociedad liberal, y que al igual que el resto de los bienes que configuran el Patrimonio Histórico-Artístico va a estar presidido por una valoración

---

<sup>1243</sup> Le Cobusier, *Hacia una arquitectura*. Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1923/1978, pp.240-241.

<sup>1244</sup> ZEVI, Bruno *Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura*. Ediciones Apóstrofe Colección Poseidón Barcelona. pp.31-32.

ideológica sostenida en una interpretación subjetiva del valor estético. En el Informe Guizot de 1830 se plantea la arquitectura clásica y la gótica las etapas dignas de protegerse por parte de las instancias oficiales: *Así (...) tenemos templos, acueductos, anfiteatros y otros vestigios de la dominación romana que pueden competir con las obras de arte de Italia (...) las maravillosas construcciones gótica que, durante los siglos XIII, XIV y XV, se suceden sin interrupción, cada día más ligera, más audaces, más ornamentadas, hasta que, finalmente, sucumbiendo su propio peso, se hunden, se vuelven más pesadas y acaban por ceder su lugar a la gracia elegante pero pasajera del renacimiento.*

*La revalorización de la arquitectura gótica/medieval* representa sin duda la importancia del patrimonio arquitectónico que hay que proteger, en unos años en el que la práctica arquitectónica está viviendo la búsqueda de un estilo que defina a la nueva sociedad moderna<sup>1245</sup>. La catedral gótica se convertirá en el inmueble por antonomasia a conservar, a los que se unen conventos, iglesias donde la arquitectura ojival esté presente. Una lectura religiosa del edificio medieval hará Chateaubriand en el *Genio del Cristianismo* definirá a los edificios medievales de carácter religioso al igual que Víctor Hugo reflejará un espíritu romántico. Un gran número de edificios medievales comenzarán a ser restaurados en países de clara tradición ojival, como Inglaterra o Francia, e incluso algunos edificios inacabados en su época, serán objetos de una intervención. En este contexto incluso va a generar una amplia polémica sobre la conservación de los monumentos medievales secularizados y expropiados durante la Revolución y caídos en manos de particulares que lo han transformados a su antojo. Al mismo tiempo que se ha dado una impronta al estilo gótico como estética por antonomasia se ha ido diluyendo las fórmulas clasicistas por el agotamiento de unas fórmulas que ha sido considerado agotado, tanto en el ámbito del Renacimiento como en el Neoclásico, así como se ha desechado la arquitectura barroca, al responder a los ideales estéticos del Antiguo Régimen. La arquitectura clasicista perdería terreno en estos años, considerados por los medievalistas del siglo XIX como un estilo agotado, un estilo antieconómico, público, ostentoso y poco confortable, siendo calificada incluso de pintoresca en términos satíricos, lo que va a producir una subvaloración de esta tipología, siendo abandonada a su suerte, especialmente la arquitectura barroca, perdiéndose en muchas ocasiones ejemplos significativos del estilo seiscientista<sup>1246</sup>. La preocupación social por el Patrimonio Arquitectónico no se va a traducir en una normativa peculiar, ya

<sup>1245</sup> En este sentido Le Corbusier se lamentaba de la inexistencia de un estilo propio para la nueva sociedad: *¿Habrá que terminar, pues, el siglo XIX, sin tener ni siquiera un estilo propio? ¿Será posible que esta época, tan fértil en descubrimientos, tan rica en fuerza vital, no tenga nada mejor que transmitir a la posteridad, en el campo del arte, que imitaciones, obras híbridas sin carácter y de imposible clasificación?.* VIOLLET-le-DUC, Eugène-Emmanuel, *Entretiens sur l'architecture*, 1863.1872.

<sup>1246</sup> BENEVOLO, Historia de la Arquitectura,

que en cierta manera se convierte en el punto primordial de todo el ordenamiento proteccionista del Estado Liberal, insertándose en el régimen de Bienes Inmuebles. Nuevamente nos encontramos con una terminología variada a la hora de designar su perfil jurídico, desde Monumento, al insertarlo dentro del término genérico del Patrimonio Histórico-Artístico, hasta los más singulares de edificio. El término edificio va a ser muy utilizado en el ámbito de la legislación a la hora de referirse al Patrimonio Arquitectónico. Etimológicamente edificio procedería del latín aedificium, palabra derivada de aedificare, edificar y significaría obra o fábrica de casa, siendo definido por Del Arco Torres como toda obra arquitectónica o de albañilería que sirva para morada del hombre, para reuniones, o cualquiera de las necesidades inherentes de la naturaleza<sup>1247</sup>.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	CONCEPTUALIZACIÓN	INSTITUCIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	RÉGIMEN JURÍDICO
Monarquía absolutista	La arquitectura como arte mecánico. Patrimonio arquitectónico como exaltación de la monarquía	Génesis de una institucionalización administrativas (Academias de Bellas Artes y Historia).	Inicio de una regulación normativa sobre Patrimonio Arquitectónico
Ilustración			
Estado liberal	Concepción de la arquitectura como disciplina científica. La arquitectura se reconoce como una identidad peculiar no solamente dentro del campo artístico	Génesis de la institucionalización administrativa	

***- La configuración del entorno como marco protector del patrimonio histórico: La invención del patrimonio urbano.***

En casi todos los manuales de Patrimonio se resalta la impronta que tuvo La Revolución Industrial en la aparición de nuevas formas constructivas, como fueron las fábricas, viviendas industriales y , que se plantean como la novedad de una época que con fue delimitando una nueva forma de asentamiento humano, que hoy conocemos bajo el concepto de Patrimonio Industrial. Sin embargo, al mismo tiempo fue apareciendo una nueva conciencia patrimonial por parte de algunos sectores intelectuales, en aquella ciudad que se perdía, la ciudad preindustrial, que agonizaba en sus propios cimientos, no solamente por ser ya ajena al nuevo orden social que había surgido, sino por no responder a las nuevas necesidades de la vida tecnificada,

<sup>1247</sup> DEL ARCO TORRES, M.A. y PONS GONZALEZ, M. Diccionario del Derecho Urbanístico, Granada, 1998, p.145.

pero que identificaba en cierta manera la identidad de la urbe. Surgía de esta manera lo que François Chaoy ha denominado como *la invención del Patrimonio Urbano*, que posteriormente se le ha ido dando las terminologías de centros históricos, cascos antiguos, etc<sup>1248</sup>. Juan Calatrava puntualiza a la hora de definir el Patrimonio Urbano: *Se trata de un tipo muy específico de patrimonio, que no consiste en el edificio singular, sino en las tipologías anónimas y colectivas cristalizadas a lo largo de siglos, en el entramado urbano, y no solo en el entramado urbano material (calles, plazas, parcelarios, edificios, técnicas constructivas, etc.) sino también en esa especie de patrimonio invisible que son las relaciones sociales que le sirven de marco y el sustrato cultural que lo sustentan*<sup>1249</sup>.

Sin embargo, la conceptualización de un Patrimonio Urbano que fuese objeto de protección legal no nació de manera pacífica, sino que por el contrario fue causa de amplias polémicas suscitadas entre sectores defensores de una modernidad ilimitada que no concebía a la antigua ciudad como objeto de conservación, que incluso en muchas ocasiones lo contemplaban como un mero obstáculo para la expansión, y aquellos que por el contrario defendían una museificación del ente urbano, más bien con una mirada romántica, de antiguas ruinas, que de una verdadera polémica que no sería ajena en la configuración del derecho del Patrimonio Histórico-Artístico, donde en realidad subyacía problemas sociales más allá de lo puramente patrimonial, como fueron los problemas de la especulación del suelo, con el consiguiente problema del derecho de la propiedad urbana o la intervención del Estado en la configuración de los espacios urbanos, donde el interés general primaría sobre el particular<sup>1250</sup>. Las transformaciones morfológicas producidas a raíz de su industrialización afectaron sin ninguna duda a la antigua estructura histórica de la urbe, al no existir una conciencia pública de la existencia de espacios urbanos que por la identidad histórica y artística que representaba fueran dignos de conservarse. La degradación de amplios sectores de la ciudad, como barrios históricos o incluso obras de ingeniería que se habían convertidos en focos insalubres llevó a la administración a un derribo indiscriminado, a lo que se unió los nuevos proyectos de comunicación interna que provocaron la aparición de ensanches y alineaciones que en muchas ocasiones se llevarían por delante amplias manzanas de inmuebles históricos, donde la especulación urbanística prevalecerá sobre los intereses culturales.

<sup>1248</sup> Sobre la invención del patrimonio urbano, CHOAY, François, *L'Invention du patrimoine urbain ¿Quel patrimoine aujourd'hui?*, Revista Científica Icomos. Ciudades Históricas, ICOMOS-Xunta de Galicia, 1993, pp.266-277.

<sup>1249</sup> CALATRAVA, Juan *Patrimonio Arquitectónico e historia de la arquitectura*, p.400. En la Declaración XL define a los centri storici como *quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insiamenti, e testimonino i caratteri di una viva cultura urbana*, p.188.

<sup>1250</sup> La cuestión de la defensa de la ciudad histórica como parte del Patrimonio Histórico-Artístico, legado de etapas anteriores que hay que defender, sigue siendo en nuestros días una de las cuestiones mas problemáticas a la hora de definir una política de conservación de los espacios urbanos de carácter histórico, y que sin duda alguna está todavía lejos de definirse una delimitación conceptual definitiva.



Sin embargo, un factor determinante a tener en cuenta y que probablemente sea primordial a la hora de entender la configuración de la nueva ciudad, sea la concepción del llamado espacio público. El espacio público es un término polisémico, que a la hora de establecer su naturaleza jurídica, en principio existe un acuerdo doctrinal, al definirlos como aquellos espacios de usos y dominio colectivo, contraponiéndose a los espacios de propiedad privada, ya sean abiertos o edificados. El espacio público siempre existió en los espacios urbanos<sup>1251</sup>, pero en la sociedad liberal va a adquirir una nueva dimensión más abierta a los intereses de los ciudadanos, aunque no en el sentido democrático del término, sino en favor de la clase dominante. Los antiguos espacios públicos creados en el Antiguo Régimen están definidos a favor de la exaltación de los poderes sociales establecidos, donde se expresaba la identidad de una ciudad estamental, a través de amplios ceremoniales lúdicos y espiritualistas de carácter teatralista, que aunque participativos por los habitantes de la urbe, estarían inmersos por una planificación desde el poder. La plaza como espacio abierto se convierte en un marco delimitado por los poderes estamentales, centro de exaltación de valores sociales de identidad<sup>1252</sup>. María José González Ordovás puntualiza en este sentido *el barroco considera al lugar público como un ámbito para la manifestación de verdades universales que no dependen de los hombres*. En 1781 en la obra de Francesco Milizia, *Princippi di architettura civile* ya encontramos una división de los bienes inmuebles en públicos y privados: *Una subdivisión sumaria de los edificios según su uso, con la diferenciación entre públicos y privados, y una clasificación de los edificios públicos atendiendo a su finalidad. Así, estos aparecen subdivididos en edificios de seguridad pública (cuarteles, prisiones, arsenales, puertos, faros, etc), edificios de utilidad pública (universidades, bibliotecas, academias de bellas artes, colegios, etc), edificios de derecho público (tribunales). El espacio público deja de ser un lugar de triunfo para convertirse en otra de meditación y aprendizaje*.

La sociedad burguesa consagra el espacio público que inicia el recorrido que nos llevará a la delimitación estructural actual, por lo que al carácter cerrado de la ciudad *antigua* se incorpora una ciudad *abierta* de movimientos y circulación de bienes y personas, donde flujos de ciudadanos puedan recorrer libremente su ratio espacial cotidiano. La política de

---

<sup>1251</sup> Antonio García García puntualiza como *a lo largo de la historia han variado las funciones y maneras del espacio público con su contexto urbano (...): En la concepción clásica predomina la función social y la participación activa en un espacio concreto: el ágora helenística, el foro romano, la plaza central de la medina islámica o la plaza mayor hispánica de los siglos XVI y XVII; espacios que aglutinan los edificios y la actividad política y/o religiosa, el mercado, los actos colectivos, etc. Frente a éste, la lógica urbana de los últimos siglos determina que la sociabilidad del espacio público se difunda por todo el territorio*. GARCIA GARCIA, Antonio, *Vitalidad y crisis en los espacios públicos de Sevilla*, Diputación de Sevilla, Ciencia Sociales, 20, Sevilla, 2006, p.24.

<sup>1252</sup> Juan Ramírez sostiene que *el espacio ideal de la Contrarreforma es una caja de resonancia para la retórica del poder. La plaza y la calle son los lugares privilegiados; en ellos se desarrolla la fiesta, ceremonia colectiva (...)* RAMIREZ, 1992, p.153.

transformación del espacio público por parte del Estado Liberal se hará incluso con el derribo de amplios sectores de la ciudad histórica. En nombre de una modernidad mal entendida y de los valores de una nueva sociedad en alza, se derribarán conventos, iglesias y palacios con sus entornos urbanísticos que habían sido eje primordial del orden urbano, y surgirán plazas públicas, convertidas en el ámbito y escenario de la vida cotidiana, lugar de encuentros obligados en los ámbitos sociales, reflejada en la literatura del momento (Balzac, Zola, Joyce o Proust, por citar algunos), exaltadoras de valores patrióticos (es el lugar donde se celebran los acontecimientos políticos y sociales más trascendentales de la ciudad y de ámbito nacional) y de identidad de clases, ya que solamente acude mayoritariamente y es su protagonista excepcional la burguesía nacionalista y propietaria del nuevo orden establecido. Incluso surgirá una jerarquización de plazas públicas, predominando sobre todas ellas, aquella donde se ubica el edificio del ayuntamiento, de nueva creación o remodelado, símbolo de la nueva realidad sociopolítica establecida por la burguesía simbolizada en la nueva institucionalización representativa frente a la rigidez política de las instituciones políticas del Antiguo Régimen. La plaza del Ayuntamiento será amplia, dominadora, lugar escenográfico por antonomasia que ha sustituido ampliamente los escenarios público de carácter religioso del Barroco, y es que el nuevo espacio público es laico (aunque se sigan celebrando esporádicamente ceremonias religiosas), reflejo de la nueva realidad social. La ornamentación del nuevo espacio público ha ido sustituyendo los símbolos regios y religiosos, propios del Antiguo Régimen por esculturas conmemorativa de carácter monumental. Las primeras transformaciones urbanas lo encontramos en la París de Napoleón III, siguiendo los planes urbanísticos del barón Haussmann (1801-1891), quien entre 1853 y 1870 convertiría la antigua urbe medieval parisina en una metrópolis burguesa, por lo que tuvo que derribarse amplias manzanas del viejo tejido urbano medieval, con la intención de dotar a la ciudad de bulevares, jardines, etc, símbolo de progreso y del triunfo de la burguesía que había supuesto el régimen de Napoleón III<sup>1253</sup>. Siguiendo el modelo francés se proyectaría esta modernización en otras urbes europeas

<sup>1253</sup> Como apunta Ignacio González Vara en este cambio morfológico se latían objetivos diversos *desde aquellos derivados del control estratégico de la agitada capital industrial que acababa de conocer los disturbios obreros de 1848 y que, merced a la cirugía haussmanniana, con sus nuevas y despejadas avenidas rectilíneas, permitía un desplazamiento rápido e inmediato de las tropas y cañones, hasta aquellos otros motivos de signo más altruista, como los higiénicos, atajando con la piqueta demoledora la insalubridad de los barrios antiguos. Sin embargo, estos cambios radicales en la morfología tradicional de la ciudad también vienen fomentados por otros fines más oscuros, como el indefectible calado de las operaciones inmobiliarias a gran escala, con sustanciosos intereses en las operaciones de destrucción-reconstrucción, que generan altas cotas de inversión y especulación en la ciudad*

como el Ring vienes de Forster y Lohr, un anillo que circundaría la capital del imperio austro-húngaro o la planificación de Hobrecht para Berlín<sup>1254</sup>.

El cambio morfológico que sufrieron las ciudades históricas europeas no fue ajeno de críticas, desde los que podríamos calificar de posturas románticas, a otras que ya insinuaban la concepción científica de un espacio urbano de carácter histórico al que había que respetar<sup>1255</sup>. Un gran número de escritores románticos, añorando la urbe histórica perdida, abrieron el camino a la concienciación pública de la existencia de un espacio histórico que había que respetar. El cambio de la ciudad histórica a la ciudad industrial ya aparecía reflejado en los textos del poeta Chateaubriand, quien al volver de París de su exilio de 1800, a modo de un manifiesto conservacionista, se lamentaría del cambio producido en la urbe: *El viajero no veía ya desde lejos aquellas benditas torres que antes se alzaban hasta el cielo como otros tantos testigos para la posteridad; y nuestras ciudades, despojadas de sus recuerdos, parecían ciudades recién construidas en medio de un mundo nuevo*. Víctor Hugo publicaría en 1825 el famoso artículo *Guerra a los demolidores*, denunciando la pérdida de los monumentos medievales a raíz de las transformaciones urbanísticas. Medio siglo después, casi en los mismos términos, el poeta Charles Baudelaire en su obra *El cisne*, perteneciente a las *Flores del Mal* (1857), lanzaría un grito de desesperanza por la pérdida de la ciudad antigua: *El viejo París ya no existe; la forma de una ciudad cambia más pronto, ¡ay!, que el corazón de un mortal*. De las filas de arquitectos fueron surgiendo voces a favor de la conservación de los espacios urbanos históricos, aunque sin embargo, no hubo en principio una uniformidad de criterios. Un primer grupo formado por John Ruskin<sup>1256</sup>, William Morris, o Patrick Geddes, defenderían el conservadurismo a ultranza de las ciudades, oponiéndose a toda transformación morfológica que pudiera peligrar su identidad original. Sin embargo, en sus textos no se vislumbra aún

---

<sup>1254</sup> Benevolo cita un amplio número de ciudades europeas que en la segunda mitad del siglo XIX van a sufrir una amplia transformación de su estructura urbana afectando su identidad histórica.

<sup>1255</sup> Cabe mencionar la crítica puramente ideológica en torno a la concepción de la nueva ciudad burguesa y a los valores que representaba, como ya aparece recogido en los textos de *El Emilio* de Rousseau: *Los hombres no han sido hechos para ser encerrados en hormigueros sino esparcidos sobre la tierra que deben cultivar (...) Las ciudades son el abismo de la especie humana (...) Las ciudades populosas son las que dejan a un Estado exhausto y son su debilidad; la riqueza que producen es ilusoria y aparente, es mucho dinero y poco efecto (...) Todos los que huyen de las grandes urbes son útiles por el solo hecho de irse, pues todos sus vicios provienen de ser muy pobladas* y en Marx y Engels en el *Manifiesto Comunista* declararía el aspecto negativo de la nueva ciudad al considerar que *la burguesía ha sometido al campo el imperio de la ciudad. Crea ciudades enormes, intensifica la población urbana en una fuerte proporción respecto a la campesina (...)*

<sup>1256</sup> Los primeros teóricos de índole romántico como John Ruskin concebirán la ciudad histórica como un ámbito separado e irreconciliable con la ciudad moderna no, por la inexistencia de un valor histórico en ésta, sino por la destrucción que con ella se produce de la relación armónica existente entre hombre y sociedad, razón propiciatoria en la cualificación de la ciudad histórica.

una verdadera concienciación de la existencia de un centro histórico en el sentido moderno de la palabra, ya que sus posturas estaban más cercanas a la línea de los escritores románticos que de posiciones plenamente técnicas<sup>1257</sup>.

Al mismo tiempo un grupo de arquitectos y urbanistas, más alejados de enfoques nostálgicos de tintes románticos, y más cercano a la realidad histórica que estaba surgiendo, protagonizada por la Revolución Industrial, fueron el punto de partida de la existencia de una concienciación científica de la defensa de espacios públicos de carácter histórico. Se ha afirmado en muchas ocasiones que la génesis de su valoración patrimonial se encuentra en la propia política de restauración de los edificios históricos suscitada por los gobiernos liberales, ya que al derribarse el ámbito urbano donde estaban insertados, en muchos casos perdían su identidad al quedarse aislados en un contexto urbano descontextualizado. De esta manera, catedrales como Notre-Dame de París o el Duomo de Milán, se restauran y se aíslan de su entorno histórico, como fase conclusiva de su restauración, ya que la arquitectura menor que le rodea se considera que perjudica visualmente al inmueble histórico protegido, y al mismo tiempo se inserta en un contexto moderno. No existía por consiguiente una verdadera concienciación patrimonial del ámbito urbano que rodeaba al inmueble. Un paso importante en la delimitación del patrimonio urbano nacería en el momento que se va ir delimitando el concepto del entorno, como espacio envolvente de un inmueble de clara referencia histórica a la que había que proteger, siendo objeto de un amplio debate a lo largo de este periodo, ya que tanto el propio término que lo designe como su contenido semántico irán variando paulatinamente.<sup>1258</sup> Sería Camilo Sitte quien daría el primer paso en la conceptualización científica del entorno como espacio público de valor patrimonial a defender en su obra *Construcción de ciudades según principios artísticos* (1889), especialmente en su capítulo II *De que el centro de la plaza debe de estar libre*, aunque como puntualiza José Castillo no en función de la existencia de unos valores propios del entorno que permitan su protección como parte del Patrimonio Histórico, sino por su inestimable efecto significador sobre los monumentos (...) Con Camillo Sitte el entorno, además, se justifica y caracteriza en función de parámetros científicos propios de la disciplina urbanística, hecho éste fundamental para fundamentar la existencia del entorno como legítima ambición de protección del Patrimonio Histórico-Artístico<sup>1259</sup>. Su gran mérito fue como apunta George R. Collins poner de manifiesto el absurdo y estereotipado carácter de

<sup>1257</sup> DE LAS RIVAS, Juan Luis *La reutilización del espacio. Sobre las condiciones del proyecto en la ciudad histórica* en Restauración Arquitectónica T.II Universidad de Valladolid pp.210-211.

<sup>1258</sup> CASTILLO RUIZ, J. *El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural: concepto, legislación y metodología para su delimitación* Granada, Universidad de Granada, 1997, p.17. José Castillo Ruiz precisa como el entorno, como ámbito espacial objeto de protección, ha experimentado importantes variaciones en sus contenidos, significados, valores y extensión espacial desde el inicio a mediados del siglo pasado de los procedimientos científicos de intervención en el Patrimonio Histórico (...).

<sup>1259</sup> CASTILLO, José, 1997, p.42.

muchos de los conceptos que estaban siendo utilizados tanto en la modernización de los cascos antiguos, como en la proyección de los nuevos distritos urbanos<sup>1260</sup>.

No será hasta las tesis de Gustavo Giovannoni (1873-1947) cuando podemos afirmar la existencia de una concepción científica del entorno plenamente definida. En 1913 publica un artículo en la revista *Nuova Antologia*, titulado *Vecchie Città ed Edili Nuova*, donde defendía que los problemas de la ciudad histórica debían de ser considerados dentro de un marco común donde se previeran los problemas de tipo económicos, administrativos, por lo que consideraba que la ciudad antigua había sido desvirtuada en su identidad propia, al convertirla en el núcleo urbano resultante de la ampliación de la urbe, por lo que los centros históricos estaban mal planteados, ya que no se debía haber propuesto insertar forzosamente la vida moderna en un organismo concebido para fines diferentes, por lo que se debía de despejar los centros antiguos de aquellas funciones que no podían ser soportadas por las viejas estructuras<sup>1261</sup>. En 1916 se publica la obra de Marcello Piacentini *Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo sviluppo della città moderna*, de tintes plenamente conservacionistas, al definir a la ciudad como una tribuna preziosa ove si conservano con religione i tesoro e le tradizioni delle epoche passate (...) <sup>1262</sup>. En contraposición a la práctica del *sventramento* o transformación violenta de las ciudades, puestas de moda por las razones de la higiene, por la retórica urbana y por la especulación privada (...) que han turbado la armonía y el carácter de las ciudades antiguas, han sacrificado obras de arte, han requerido ingentes financiaciones, pero sin resolver racionalmente los problemas higiénicos, defendería la práctica del *diradamento edilizio*, que consistía en el saneamiento y la restauración de áreas urbanas históricas, controlando las demoliciones parciales de degradaciones y elementos postizos y aplicando al tejido históricos los principios modernos de higiene y funcionalidad, por lo que dos principios que tradicionalmente contrapuestos podían ser perfectamente armonizados<sup>1263</sup>, por lo que las reformas necesarias para mejorar la higiene y viabilidad del centro deberían

---

<sup>1260</sup> COLLINS, George R. y Christiane C. *Camillo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p.9.

<sup>1261</sup> GIOVANNONI, Gustavo *Vecchie città ed edilizia nuova*, *Nuova Antologia*, Giugno, 1911, p.415. Las teorías urbanísticas de Giovannoni fueron criticadas por Bonfanti y Capitel al considerar que el arquitecto italiano estaba defendiendo la museificación de los centros históricos.

<sup>1262</sup> PIACENTINI, Marcello *Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo sviluppo della città moderna*, 1916.

<sup>1263</sup> Giovannoni explicaría el método del *diradamento edilizio* con la demolición en pequeños tramos seleccionados, dejando áreas libres y reconstruyendo poco o nada, reduciendo así al mínimo la introducción de nuevos elementos, casi siempre inarmónico con lo viejo; se aplica comenzando con la selección de las zonas que se deben mejorar entre las más adecuadas (...) demoliendo las edificaciones que no revisten ningún interés (...) las ventajas higiénicas y artísticas caminan de este modo al mismo paso, y las razones del desarrollo futuro no son desorbitantes ni amenazan las del desarrollo actual. GONZALEZ-VARAS, Ignacio, p.363.



seguir la fibra del núcleo antiguo. En 1919 al ser nombrado miembro de la Commissione per la sistemazione edilizia del quartiere Rinascimento a Roma intentaría aplicar en la práctica sus teorías de regeneración de los entornos históricos, pero la práctica urbanística seguiría siendo ajeno a ella, ante la mayoritaria práctica del sventramento e incluso la ausencia de una noción consolidada de centro histórico. Sin embargo, se había dando un paso crucial en el concepto del entorno como mero marco urbanístico del edificio aislado a la propia concepción de la ciudad histórica.

Desde la fila de la nueva arquitectura vanguardista se pusieron en tela de juicio las posturas conservacionistas del tejido urbano de carácter histórico. Uno de los defensores de la nueva realidad urbanística sería Ludwig Karl Hilberseimer (1885-1967) fue uno de los promotores del movimiento moderno, publicando en 1927 una obra titulada *la arquitectura en la gran ciudad*, donde se perfila el nuevo urbanismo que se estaba desarrollando a principios del siglo XX, definiendo la idea de la gran ciudad como nueva delimitación frente a la ciudad antigua que estaba desapareciendo, por lo que realizó una crítica a la ciudad tradicional, defendida por los sectores conservadores del momento. Hilberseimer define la gran ciudad como *un producto del desarrollo económico de los tiempos modernos. Es la consecuencia natural y necesaria de la industrialización del mundo. Las grandes ciudades del pasado se distinguen de las grandes ciudades modernas sobre todo por sus condiciones económicas (...)*. Apeló a la reestructuración de la gran ciudad y defiende incluso la eliminación de aquel tejido urbano de carácter histórico que pudiera impedir su expansión: *Tras un ensanche tan considerable de la ciudad hay que abordar el saneamiento de la ciudad interior y con ello, una reestructuración de la población. Con la fundación de nuevos barrios residenciales, todo el interior urbano tiene que quedar libre para la vida comercial. Hay que regular las calles, derribar edificios y manzanas estrechas, insanas y mal edificadas y volverse a edificar nuevamente. Este saneamiento tiene que realizarse sin consideración para con historicismos sentimentales. Porque nuestro deber no es conservar el pasado sino preparar los caminos del futuro. El saneamiento y transformación a gran escala de París, realizados a mediados del siglo XIX por Georges Eugène Haussmann, demuestran que es posible transformar incluso un núcleo medieval hasta hacerlo corresponder a las necesidades modernas*<sup>1264</sup>. Incluso defendería la nueva arquitectura que iba insertándose en el nuevo urbanismo: *La gran ciudad, con sus exigencias y finalidades completamente nuevas, ha producido una arquitectura nueva, diametralmente opuesta en muchos aspectos a la arquitectura del pasado. Aunque dependa mucho de las formaciones sociales, económicas y productivas, la arquitectura del pasado tiene un origen esencialmente religioso-cultural. La arquitectura de la gran ciudad carece completamente de tales relaciones. Está causada, sobre todo, por necesidades reales, determinada por la objetividad y la economía, por los materiales de construcción(...)Es independiente, por tanto, de la arquitectura del pasado, nacida en circunstancias diferentes, y no la puede hacer*

<sup>1264</sup> HILBERSEIMER, Ludwig *La arquitectura de la gran ciudad*, Barcelona, 1927/1979, p.8.



*derivar de ella(...).La arquitectura de la gran ciudad es un tipo de arquitectura nuevo, con formas y leyes propias*<sup>1265</sup>. Sería con la redacción de la Carta de Atenas de 1931, en su punto III titulado *Puesta en valor de los Monumentos*, se había abierto el camino definitivo en el ámbito de la protección de la ciudad histórica: *La Conferencia recomienda que se respete en la construcción de los edificios el carácter y la fisonomía de las ciudades, sobre todo en la vecindad de los monumentos antiguos: los alrededores de los cuales deben ser objetos de cuidados especiales, debiendo ser preservados incluso conjuntos y perspectivas particularmente pintorescas*. No obstante, la cuestión higiénica siempre va a prevalecer al interés histórico, como lo recoge el punto 69: *en algunos casos, la demolición de casas y tugurios insalubres en los alrededores de un monumento de valor histórico destruya un ambiente secular. Eso es lamentable, pero inevitable. Podrá aprovecharse la ocasión para introducir superficies verdes. Los vestigios del pasado se bañarán con ello en un nuevo ambiente, acaso inesperado pero ciertamente tolerable, y del que, en todo caso, se beneficiarán ampliamente los barrios vecinos*. Carlos Argan afirmaría que *la ciudad no es sólo una concentración de productos artísticos, sino un producto artístico en sí mismo*<sup>1266</sup>. Las legislaciones nacionales del ámbito europeo irían recogiendo paulatinamente estos conceptos, aunque en la mayoría de los casos su ejecución quedaría más bien en el plano teórico, primado otros intereses más cercanos a la propia especulación urbanística. Las leyes urbanísticas que nacerán en esta primera fase de la ciudad industrial no aparece prácticamente ninguna referencia al patrimonio urbano, tan solo en casos aislados a los inmuebles históricos que se deben de respetar, priorizando los intereses higiénicos y sanitarios, y las proyecciones de ensanches y alineaciones como instrumentos de expansión urbana. En la legislación francesa de principios del siglo XX ya se hacen algunas referencias al Patrimonio Urbano, por lo que en la Ley de 1913 se contemplaba la protección del entorno de los edificios protegidos e inscritos y regularizaba el control sobre cualquier *edificio o terreno situado en el campo de visibilidad* del monumento. En la Ley de 1930 se extendería este concepto a *monumentos naturales, a los sitios de carácter artístico, histórico y científico, legendario o pintoresco*. La salvaguardia de los sitios históricos estaría asegurada por una ley de 2 de marzo de 1930. La concepción del entorno sería recogido ya muy tardíamente en la ley italiana de 1 de junio de 1939. No sería pues hasta después de la II Guerra Mundial cuando se asista a una definitiva judicialización del patrimonio urbano. Ezio Bonfanti señala como *innovadores y conservadores comparten la idea de que el hilo que discurre día por día se ha quebrado en algún punto del siglo XIX, de que entre la ciudad antigua y la de nuestros días se ha abierto una factura, que pertenecen a mundos distintos y se perjudican mutuamente*<sup>1267</sup>

---

<sup>1265</sup> HILBERSEIMER, Ludwig, 1979, p.98.

<sup>1266</sup> ARGAN, Carlos *La Historia del Arte como historia de la ciudad* Barcelona, 1984.

<sup>1267</sup> BONFANTI, Ezio *Arquitectura para los centros históricos*, en AA.VV. *Arquitectura racional*, Madrid, Alianza Forma, 1979, p.226.

	CONCEPTUALIZACIÓN	INSTITUCIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	RÉGIMEN JURÍDICO
<b>Monarquía absolutista</b>	No existe una concepción de ciudad histórica. Se defienden solo algunos espacios públicos de valor	Las Academias de Bellas Artes se encargan del ornamento y decoro de la ciudad	No existe una figura jurídica concreta.
<b>Ilustración</b>	No concibe la existencia de una ciudad histórica como tal a la que haya que respetar su morfología.		No existe una figura jurídica concreta.
<b>Estado liberal</b>	Surge el concepto de Entorno del Inmueble Histórico (teorías de Giovanni). Concepto inicial de centro histórico	Las instituciones municipales.	Se judicializa el concepto del entorno desde principio del siglo XX. Se inserta en el régimen de los Bienes Inmuebles

### 1.2.2. Los bienes muebles de interés histórico y artístico: Los bienes de artes plásticas.

La pintura y la escultura habían alcanzado el status de artes liberales en Florencia en 1563 cuando se creó la Academia de Dibujo en Florencia. La Monarquía y la Iglesia habían dado una primacía en la creatividad artística en el ámbito del Renacimiento que alcanzaría su momento culminante en el Barroco, al convertirse no solamente en meros productos de exposición visual con contenidos de belleza contemplativa, sino como portadores de un lenguaje iconográfico preciso que exaltaba las instituciones políticas y sociales del Antiguo Régimen, bien a raíz de los decretos del Concilio de Trento, en el caso de la Iglesia, bien en las normas del gusto regio, especialmente con el retrato real y la pintura mitológica, como instrumentos vitales de exaltación de la Corona. El Estado Liberal nacionalizará el discurso, convierte a las artes plásticas en instrumentos de imágenes de exaltación del nuevo sistema político, y al mismo tiempo intenta recuperar las piezas primordiales del pasado histórico, dándoles una relectura de las mismas, que se basa primordialmente en la exaltación del genio creativo de la nación, que le confiere una identidad. Sin embargo, las artes plásticas van a sufrir una importante transformación en este momento, ya que va ir surgiendo un proceso científico de conceptualización de la creatividad artística, con la irrupción de la historia del arte, que ha ido adquiriendo un status independiente y que ha ido descubriendo nuevos valores, más allá de lo puramente ideológico. No todos los bienes pertenecientes a las artes plásticas van a ser tutelados sino que se haría una peculiar selección más por gusto estético e ideológico que científico, como fue la revalorización de etapas históricas precisas, siendo sin duda la producción murillescala que se había impuesto en todos los mercados artísticos europeos desde el siglo XVIII, prolongándose hasta bien entrado el siglo XIX. A pesar de la impronta que se le da socialmente a las colecciones de esculturas y

pinturas mostradas especialmente en los museos inaugurados en este momento, su régimen jurídico no va a gozar de una precisión peculiar, sino que insertada en el régimen genérico de los Bienes Muebles, va a estar siempre en un régimen jurídico supeditado a los inmuebles.

### **1.2.3. La gestación de los llamados Patrimonios Especiales: El Patrimonio Arqueológico y el Patrimonio Documental.**

#### **- Patrimonio Arqueológico.**

Sin duda alguna uno de los ámbitos mejor protegido en la actualidad en relación al patrimonio monumental es sin duda el Patrimonio Arqueológico, dotado en muchos países de una legislación nacional específica, que le da su propia identidad y recoge su propia problemática de protección y conservación. Sin embargo, lo específico de este llamado Patrimonio Especial en muchas ocasiones se diluyó en el más amplio concepto de Patrimonio Histórico-Artístico, no siendo hasta el principio del siglo XX cuando comenzó a contar con algunas normativas específicas<sup>1268</sup>. Y es que la delimitación de la conceptualización del Patrimonio Arqueológico como un bloque de contenidos específico que le diferenciará de otros legados patrimoniales fue el verdadero campo de batalla a la hora de configurar una normativa específica<sup>1269</sup>. Al igual que ocurría con el Patrimonio Arquitectónico, en un primer momento la Arqueología no aparece definida plenamente hasta bien entrado el siglo XIX<sup>1270</sup>, confundándose su práctica con lo histórico y artístico, y no con la de un investigador de un pasado remoto, pero fehaciente por los hallazgos materiales que se están produciendo, y que le da un fundamento a la hora de conservarlo<sup>1271</sup>. Las primeras legislaciones del Patrimonio Histórico-Artístico

---

<sup>1268</sup> Alegre Avilas señala como el problema principal de la definición del patrimonio arqueológico deriva del hecho de no tener unos límites bien dibujados y no conformar una categoría unitaria e independiente. En general, la ley recurre a una circunscripción del contenido a través de la metodología

<sup>1269</sup> La diferencia conceptual entre Patrimonio Arqueológico e Historia del Arte ha tenido un reflejo en el ámbito jurídico como podemos comprobar en En la Declaración XXII de la Comisión Franceschini define se entiende por bienes arqueológicos, independientemente de su valía artística, las cosas muebles e inmuebles que constituyan testimonio histórico de épocas, civilizaciones, centros o asentamientos, cuyo conocimiento se realiza prominentemente mediante excavaciones y hallazgos. A lo que añade Giannini, por lo cual, *los bienes arqueológicos no son los bienes culturales relativos a las civilizaciones del mundo antiguo, a la protohistoria y a la prehistoria, sino también a civilizaciones más cercanas, cognoscibles mediante excavaciones, hallazgos y descubrimientos (como, por ejemplo edificios, necrópolis, etc, medievales) y son independientes de su valía artística, ya que, como por lo demás es sabido, son tales también las modestas y pocas conmovedoras huellas de muros de edificio del mundo antiguo, las deslucidas monedas romanas (...)*. GIANNINI, pp.22-23.

<sup>1270</sup> BIANCHI BANDINELLI, R. *Introducción a la Arqueología*, Akal, Madrid, 1982.

<sup>1271</sup> Todavía en 1958 Wheeler afirmaba *¿Qué es en realidad la arqueología? Yo mismo no lo sé del todo bien... ni siquiera sé si la Arqueología ha de ser descrita como un arte o como una ciencia... pero por lo menos está claro que la Arqueología depende cada vez más de una multitud de ciencias y que ella misma adopta cada vez más también la metodología de una ciencia natural... es, ante todo, un proceso de síntesis* WHEELER, M. *Archaeology from the*

en los primeros decenios decimonónicos no consideraban al Bien Arqueológico con una personalidad plenamente diferenciada, sino que quedaron insertados en un corpus normativo más amplios, más bien definidos por sus valores de Antigüedad que por su valía científica con plena identidad autónoma. La identificación de la Arqueología con la Historia del Arte hunde sus raíces en la época renacentista, cuando ambas materias estaban gestionándose, y adquirirá su personalidad propia ya en el siglo XIX a través de los anticuarios. Sin pretender elaborar en este trabajo una historia de la arqueología debemos de esbozar algunas consideraciones sobre su concepción científica, para comprender en que estadio de desarrollo a nivel científico se encontraba a la hora de delimitar su protección jurídica, especialmente su deslinde con el ámbito de la Historia del Arte<sup>1272</sup>. Es conocido que desde el mundo clásico ya se encuentra el término *archaiologuía* con el significado genérico de *noticias sobre los tiempos antiguos*, como se refleja en las obras de Homero, Pausanias, Tucídides, Plutarco o Vitrubio, por lo que se puede hablar de una etapa pre-arqueológica, de una fase especulativa. No es sin embargo hasta el Renacimiento cuando la Arqueología se convierte *en actos concretos y en ideas definidas respecto a los objetos y obras de arte del pasado. La búsqueda del pasado como una utopía que debe ser reconstruida es, sin duda, algo que convierte a este interés en una actividad consciente y positiva, que conducirá de inmediato a la colección de objetos del pasado*. Las excavaciones iniciadas en Roma por Pío II (1458-1461) y Alejandro VI (1492-1503) inicia una de las más antiguas colecciones arqueológicas formado especialmente por obras antiguas del mundo clásico que sobresalen en principio por inquietudes estéticas, por lo que se desprende como apunta José Alcina que *la Arqueología, en su más primitiva forma, es una Arqueología fundamentalmente esteticista, clasicista y particularista; se interesa por la búsqueda de la belleza o de las obras bellas, dentro de unos cánones estrictamente clásicos*<sup>1273</sup>. Surge la figura del anticuario, *arqueólogos amateurs entusiasmados por las reliquias del mundo griego y romano, centrados sin duda en la Antigüedad clásica*<sup>1274</sup>. El arqueólogo/anticuario<sup>1275</sup> se consagraría únicamente al estudio de los vestigios monumentales y a las obras de arte de la Antigüedad clásica, Grecia y Roma, surgiendo el problema de que Arqueología e Historia del Arte empiezan a ser a un tiempo dos conceptos sinónimos, que aludían a la misma realidad. Todavía durante el siglo XVIII la distinción no se había terminado de llevar a cabo, ya que el propio Winckelmann, en su

---

Earth, London, 1954, ed. cast. FCE, México, 1961, p.10. Sobre la definición de la Arqueología y los arqueólogos cabe citar CRIADO BOADO, F. *¿Qué es un arqueólogo? ¿Qué es la arqueología?*, Revista de Arqueología, 82, p.5.

<sup>1272</sup> DIAZ ANDREU, M. *Arte y Arqueología: la larga historia de una separación. Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*, CSCI, Madrid, 1995, pp.151-185.

<sup>1273</sup> ALCINA FRANCH, José *Arqueología Antropología*.

<sup>1274</sup> RENFREW, C. y BAHN, P. *Arqueología. Teorías, métodos y prácticas*. Akal, Madrid, 1998, p.20. AGUILA ESCOBAR, Gonzalo *Léxico de Arqueología*, Granada, 2006. p.18.

<sup>1275</sup> Sobre el mundo de los anticuarios, DANIEL, G., *Historia de la Arqueología. De los Anticuarios a Gordon Childen*, Alianza, Madrid, 1996; ALCINA FRANCH, J. *Arqueólogos o anticuarios*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1995.

Historia de las artes del dibujo entre los antiguos, que supuso una primera distinción cronológica de varias fases del mundo antiguo, no llegó a desligarse plenamente ambos campos de investigación. No obstante, el anticuario se convierte durante el siglo XVIII en el verdadero generador de conocimiento específico de esta peculiar disciplina, ya que al no ser meros coleccionistas y comerciantes de antigüedades, mostraron interés no solo en catalogar los restos, sino que pronto mostraron interés en catalogar los restos, sino que pronto se desligaron de ese amateurismo estéril desarrollando técnicas de excavación o interpretando los restos hallados, que evolucionarían posteriormente a métodos científicos. No se debe de olvidar que en este siglo se llevarían a cabo las primeras excavaciones, con el descubrimiento de Pompeya y Herculano, que dieron lugar a los primeros trabajos metódicos y sistemáticos, y que en palabras de Gonzalo Águila, supuso para la Arqueología *que se empezara a tener en cuenta los restos materiales y no sólo las fuentes y documentos escritos a los que estuvo tan apegada en etapas anteriores, hasta el punto que la Filología y la Arqueología estuvieron íntimamente ligadas a través del estudio de las fuentes literarias como único medio de conocer el pasado*. La consagración de la Arqueología científica como disciplina científica vendrá ya dada en la segunda mitad del siglo XIX, con hechos científicos que revolucionaron su propia concepción como fueron el reconocimiento de la antigüedad del hombre, a raíz de las tesis de Boucher de Pether, que rompería con la concepción bíblica del diluvio universal, que hasta entonces había marcado el límite temporal del hombre moderno y la formulación del sistema de las tres edades. De esta manera se superaba la inserción de la Arqueología como variante de la Historia o de la Historia del Arte, había ganado su especificidad<sup>1276</sup>. Al mismo tiempo en los ordenamientos jurídicos contemporáneos se utiliza el concepto método arqueológico para distinguirlos de otros bienes que estarían insertados en el ámbito de los histórico o artístico. A principios del siglo XX, con la amplitud de las excavaciones arqueológicas, en muchos casos con el destino de un mercado fraudulento, podemos ya afirmar la génesis de una verdadera legislación específica del Patrimonio Arqueológico, siendo la legislación hispanoamericana la que abriría plenamente el camino hacia su especificación, especialmente con México, que durante todo el siglo XIX había desarrollado un amplio corpus normativo, Perú o Argentina.

Otro de los grandes problemas que van a ir surgiendo a la hora de configurar jurídicamente un patrimonio específico como es el Arqueológico,

---

<sup>1276</sup> En la actualidad se considera que El campo de la Arqueología no se limita a la Antigüedad como un marco cronológico consensuado ni a los objetos de valor artístico sino que implica a todo el comportamiento humano desde sus orígenes (y por tanto desde la aparición del hombre) hasta la actualidad. Sobre el papel de la Arqueología como ciencia social, ALVAREZ, M. R. y FIORE, D., *La Arqueología como ciencia social: apuntes para un enfoque teórico-epistemológico*, Boletín de Antropología Americana, 27, julio, 1993, pp.20-23.

fue la delimitación de los propios bienes a proteger. La singularidad del Patrimonio Arqueológico en cuanto al bien jurídico protegido es que participa al mismo tiempo de un carácter de bien muebles (las piezas arqueológicas independientes que se van a ir descubriendo) y de bien inmueble (el lugar o espacio donde se ubica un yacimiento, etc). El yacimiento arqueológico se fue convirtiendo en uno de los objetos primordiales de la normativa contemporánea del Patrimonio Monumental, teniendo ya sus inicios en los albores del siglo XIX, que designaba sencillamente un lugar de interés arqueológico, de naturaleza principalmente monumental<sup>1277</sup>. Como se observa en las primeras cartas arqueológicas sistemáticas, la mayoría de los yacimientos tomados en consideración entonces eran en su mayoría objetos claramente visibles en el paisaje: ruinas de época romanas (calzadas, puentes, mausoleos) o tumbas de épocas prerromanas. Son muy raras las menciones de hallazgos prehistóricos en cuevas y completamente ignorados los restos medievales<sup>1278</sup>. La excavación arqueológica como práctica común en la investigación metodológica se convierte al mismo tiempo en objeto de la normativa del patrimonio monumental, que desde sus inicios ya plantea algunas cuestiones que van a tener una proyección en el futuro. El problema de la metodología arqueológica

---

<sup>1277</sup>Uno de los más importantes principios es el de la desmitificación del objeto arqueológico como elemento centralizador y casi exclusivo de la investigación arqueológica (...) el protagonismo ha pasado del objeto al yacimiento arqueológico. concebido no ya en el sentido tradicional de cantera de extracción de objetos, sino del lugar geográfico, del espacio físico, donde una comunidad humana desarrolló sus actividades y estableció sus relaciones internas, entre sus miembros y externas, con otras comunidades y con el medio ecológico circundante. SAN MARTIN MONTILLA, 1994, 27.

<sup>1278</sup> FRANCOVICH, Riccardo; MANACORDA, Daniele (eds.), *Diccionario de Arqueología, Crítica Arqueología*, p.364.



PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	CONCEPTUALIZACIÓN	INSTITUCIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	RÉGIMEN JURÍDICO
<b>Monarquía absolutista</b>	Vestigios Monumentales de la Antigüedad Clásica. No hay distinción entre Historia del Arte y Arqueología	No hay una administración específica del Patrimonio Arqueológico.	Escasa Normativa del Patrimonio Arqueológico
<b>Ilustración</b>	Primeras excavaciones arqueológicas. Separación de la Arqueología de la Historia del Arte	El anticuario como figura primordial.	Primera normativa del Patrimonio Arqueológico
<b>Estado liberal</b>	Sistematización de la Arqueología como disciplina científica.	Génesis de la gestión administrativa del Patrimonio Arqueológico.	Amplia normativa específica del Patrimonio Arqueológico

Una de las novedades digna de tenerse en cuenta en el ámbito legislador sería la inclusión del llamado Patrimonio Paleontológico. Aunque podríamos pensar que la Paleontología es considerada actualmente como parte integrante del Patrimonio Histórico-Artístico, por su relación con el Patrimonio Natural, se concibe aspectos dignos de ser protegidos como bienes históricos-artísticos<sup>1279</sup>. Morales y Aguirre puntualizan que *los yacimientos y colecciones de fósiles, aparte de su valor científico (...) también hay que considerar su valor estético, cultural y algo turístico y de recreo(...)*<sup>1280</sup>. Alcalá y Morales enunciaron una serie de criterios para definir la gestión de los yacimientos paleontológicos: las categorías científicas, las socio-culturales y las socio-económicas<sup>1281</sup>. Los Bienes Paleontológicos considerados hoy como bienes jurídicos a proteger serían los fósiles y yacimientos<sup>1282</sup>. Sin embargo, la Paleontología se incluiría en el ámbito de la legislación arqueológica, por lo que se reduciría considerablemente su ámbito proteccional. La doble naturaleza mueble (fósiles) e inmueble (yacimientos) que tienen los objetos paleontológicos en la

<sup>1279</sup> Cabe señalar que el tratamiento de los objetos paleontológicos no fueron abordados por la Comisión Franceschini de 1964, ni por la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, promulgada por la UNESCO en 1972. Sería en la Carta de Restauo de 1987 donde se incluye en el ámbito del legado patrimonial, así como en la mayoría de los ordenamientos nacionales del patrimonio monumental. Los problemas

<sup>1280</sup> El profesor José del Castillo puntualiza que si atendemos al origen y la naturaleza de los objetos paleontológicos –fósiles y yacimientos– su protección debería enmarcarse dentro del Patrimonio Natural, ya que se trata de objetos naturales no creados por la acción del hombre. Sin embargo, se debe de considerar que es constitutivo de estos objetos, y de la propia ciencia que los estudia, su dimensión histórica y su pertenencia a un periodo determinado de la historia de la Tierra. Por esta razón, parece justificado que los bienes paleontológicos se integren dentro del Patrimonio Histórico tal y como tradicionalmente se viene haciendo en la legislación sobre esta materia CASTILLO RUIZ, J. *Los bienes paleontológicos: Un patrimonio especial deficientemente definido y reglamentado por la Ley del Patrimonio Histórico-Español. Paleontología y sociedad*. Sociedad Española de Paleontología, Universidad de Granada, 1992.

<sup>1281</sup> Sobre el Patrimonio Paleontológico como Patrimonio Histórico-Artístico MORALES, J. El patrimonio paleontológico. Bases para su definición actual y perspectivas futuras, en *El patrimonio geológico. Bases para su valoración, protección, conservación y utilización*. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, pp.39-52. Madrid, 1996.

<sup>1282</sup> ALCALA, Luis Reflexiones acerca de la protección del patrimonio paleontológico en España Coloquios de Paleontología, 1999,

actual legislación, se reduce prácticamente a la primera en el ordenamiento liberal, siendo los fósiles los que en cierta manera se consideraban objetos de protección.

*- Patrimonio numismático y epigráfico.*

Durante el siglo XVIII y en especial en el siglo XIX, se considera a la numismática una de las claves para el estudio del pasado, es decir, del mundo clásico. La Numismática se define habitualmente como la ciencia que estudia las monedas y medallas de todo momento y país, desde un punto de vista histórico, artístico, arqueológico y en relación con la economía y las finanzas. La génesis de esta disciplina se remontaría a los siglos XVI y XVII, cuando los coleccionistas empezaron a llamar medallas a todo tipo de objetos metálicos: desde las monedas a los objetos puramente conmemorativos, de pequeñas dimensiones, con dibujos y leyendas como las auténticas medallas (...) Las monedas proporcionan información sobre muchos aspectos de la cultura antigua<sup>1283</sup>. ¿Qué perfil jurídico presentaba el patrimonio numismático en el Estado Liberal? Estaría dentro de la categoría de los bienes muebles, que en algunos casos va a contar con una legislación específica que tiene sus raíces en la propia Ilustración. Al igual que la Numismática, la Epigrafía se convierte en un bien digno de tutela pública, más que por goce estético como fundamento ideológico de la identidad nacional que sugería el contenido documental de las raíces históricas de una nación.

*- Patrimonio documental.*

Una de las aportaciones significativas en el proceso de la configuración del Patrimonio Monumental fue la inclusión del llamado Patrimonio Documental. El documento definido como legajo del pasado que una sociedad debe preservar se incluiría dentro del grupo de bienes muebles de interés histórico, en cierta manera más por un valor ideológico que puramente científico, pero que dio como consecuencia el hecho de ser conservados como *bajage cultural*<sup>1284</sup>. La mayoría de estos documentos procederían de las antiguas instituciones religiosas como consecuencia de las medidas desamortizadoras, y del hecho de dotar a los documentos administrativos de un valor científico, cuyo incremento había sido producido por la expansión de la

<sup>1283</sup> Sobre la importancia de la Numismática en el seno del Patrimonio Histórico-Artístico, ROVELLI, Alessia, "Numismática y Arqueología" en *Diccionario de Arqueología*, p.271; CRAWFORD, M. H. "Numismática", en *Fuentes para el estudio de la Historia Antigua*, Taurus, Madrid, 1986.

<sup>1284</sup> Sin entrar a hacer un análisis exhaustivo sobre el valor del documento la llamada Teoría de las Tres Edades, que hace referencia a las tres etapas que un documento pasa desde su creación: Primera Edad, en que los documentos todavía tienen una vida dinámica, y están reunidos en los llamados archivos de oficinas; Segunda Edad, en la que los documentos carecen ya de un valor administrativo, pero su conservación es necesaria, ya que su valor legal o fiscal les hacen imprescindible para ser consultados, tanto por la Administración como por los ciudadanos, y en una Tercera Edad, los documentos adquieren un valor histórico, conformando el Archivo Histórico.

administración pública. Como resultado de ello se irán delimitando los archivos públicos, que se insertarán en las redes institucionales de los servicios públicos. El acceso de los documentos históricos depositados en los archivos públicos se convertirá en otro de los referentes primordiales de la legislación del Patrimonio Monumental durante el Estado Liberal. Junto al Patrimonio Documental se iría incorporando el llamado Patrimonio Bibliográfico, adquiriendo una serie definida de libros un valor histórico y artístico digno de conservarse, surgiendo las llamadas Bibliotecas Nacionales.

PATRIMONIO DOCUMENTAL	CONCEPTUALIZACIÓN	INSTITUCIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Antiguo Régimen	Documentos con valor legal y fiscal.	No existe una administración específica dentro del Patrimonio Monumental
Estado Liberal	Documentos con valor histórico	Archivos Históricos Nacionales

#### 1.2.4. El Valor Monumental como fundamento jurídico de la protección del Monumento Histórico-Artístico en el Estado Liberal.

VALORES PATRIMONIALES	CRITERIO MATERIALISTA	VALORES CONCRETOS QUE LO CONFIGURAN	REGULACIÓN JURÍDICA
Monarquía absolutista	Alude a los valores del pasado de los objetos con un sentido testimonial	Valor ideológico de carácter nacionalista. Valor histórico Valor estético	Valor histórico y artístico serán los fundamentos jurídicos de la protección monumental
Valor Monumental	Alude a los valores de la civilización en general.	Todos aquellos valores que emulan la creatividad humana	
Valor Cultural	Alude a los valores del pasado de los objetos con un sentido testimonial	Valor ideológico de carácter nacionalista. Valor histórico Valor estético	Valor histórico y artístico serán los fundamentos jurídicos de la protección monumental

La verdadera construcción del valor en el ámbito cultural no va a tener una verdadera génesis hasta la etapa liberal, por lo que no podemos hablar de un verdadero interés o valor en los procesos históricos anteriores<sup>1285</sup>. La

<sup>1285</sup> FERNÁNDEZ, Roberto, Notas para una introducción a la teoría y práctica restauradora en *Teoría e Historia de la Restauración*, en CLEMENTE, Carlos (Coord.) *Teoría e historia de la Restauración*, Instituto Español de Arquitectos, Universidad de Alcalá, Marzo, 1977, p.55 *La cuestión del valor del monumento, su axiología, supone una discusión relativamente moderna. En efecto, en las grandes culturas clásicas tanto el aislamiento (en el caso de las orientales y las americanas), la autoafirmación de un ideal de belleza (en el caso griego-helenístico) y la voluntad sincrética imperialista (en el caso romano), colocaban el problema del monumento lisa y llanamente, en el mismo plano de la decisión y proyecto de sus objetos culturales fundamentales. Es decir, no parece encontrarse una conciencia histórica del monumento, en*

acepción semántica que le damos al concepto valor está determinada por una prevalencia que encierra extrínseca o intrínsecamente sobre algo. En cierta forma el concepto valor estaría relacionado con el de interés, término este último que alude a una clara delimitación del hecho<sup>1286</sup>. En la tradición legislativa liberal de protección del Patrimonio Histórico-Artístico, valor e interés encierran prácticamente el mismo contenido semántico, aludiendo a una misma realidad. Sin embargo, no se puede admitir que estos bienes a la hora de su protección gozaran de un valor intrínseco, sino que por el contrario no eran motivo de protección mientras que fuera designado por la autoridad competente, por lo que su valoración dependía del contexto sociocultural del momento. Se trataba por consiguiente de un valor externo, que en la mayoría de las ocasiones era ajeno incluso a las sensibilidades científicas y culturales del momento, y más cercanas a pretensiones políticas e ideológicas. La valoración de un objeto o bien que da lugar posteriormente a una tutela jurídica cambia en función a intereses diversos, utilizando para ello unas series de etiquetas, que produce al mismo tiempo de una adjetivización del concepto, un límite a una protección coherente y sistematizada del mismo. Lo histórico, lo artístico, lo antiguo han sido las etiquetas más utilizadas en el camino de la protección de los bienes, que actualmente se ha querido sintetizar bajo la denominación de valor cultural, no ajena de debates doctrinales, al no ponerse de acuerdo sobre el sentido semántico del término.

Al igual que el Bien Cultural se convierte en una construcción jurídica a modo de ensayo para unificar los distintos bienes heterogéneos del Patrimonio Cultural, la delimitación de un Valor Cultural proporcionó un intento de conexión conceptual interna a los bienes culturales<sup>1287</sup>. En la Declaración I de la Comisión Franceschini se insertaba una nueva concepción del valor patrimonial, al considerar como bien cultural todo aquellos elementos que son expresión o manifestación de las sociedades de otro tiempo, es decir aquellos testimonios materiales dotados de un valor de civilización, *beni costituenti testimonianza avente valore di civiltà*<sup>1288</sup>. La teoría habría sido delimitada por

---

*tanto vocación de reconocer unos objetos extraños y distantes, que merecieran distinguirse y mantenerse; o sea, dignos de valoración.*

<sup>1286</sup> Cabe señalar que no existe una pacífica sobre los términos interés y valor en el ámbito del derecho patrimonial histórico-artístico, ya que autores como M<sup>a</sup> del Rosario Alonso Ibañez defienden que ambos términos son equivalentes ante del constitucionalismo contemporáneo, dejándolo de serlo posteriormente, no entendiéndolo así Concepción Barrero Rodríguez, quien utiliza ambos vocablos indistintamente.

<sup>1287</sup> Rosario Ibañez delimita *el valor cultural, como algo ínsito en los bienes que integran el Patrimonio Histórico, no como algo externo o sobreañadido, va a ser el elemento de conexión conceptual interna de estos bienes, posibilitando la construcción dogmática de los mismos.*

<sup>1288</sup> En la Declaración XXIII de la Comisión Franceschini se establecía que *Salvo quanto previsto dagli altri titoli di queste Dichiarazioni, sono Beni Culturali d'interesse artistico o storico, le cose mobili e immobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione alla storia culturale dell'umanità. Relazione della Commissione d'indagine per la Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Storico, Archeologico, artistico, e del paesaggio* *Revista trimestrale del Diretto Pubblico*, Año XVI, 1966,

Giannini y publicada en la Rivista Trimestrale di Diritto Público en 1966 donde se precisaba una nueva lectura de la valoración patrimonial, al considerar al bien cultural como *cosa que testimonia material de los valores de la civilización*<sup>1289</sup>. Con ello, como en muchas ocasiones ha defendido la doctrina, como se había superado la visión esteticista que había inspirado la regulación de los bienes patrimoniales, nueva concepción que suponía la eliminación del término artístico como único elemento caracterizador de esta rama del ordenamiento jurídico<sup>1290</sup>, e incluso convertía en superfluas o simplemente reiterativas las otras dos calificaciones de lo artístico e histórico que había delimitado el ordenamiento jurídico liberal<sup>1291</sup>. Y es que en la legislación liberal los bienes siempre quedaban impregnados de los valores históricos y estéticos, dejando sin trascendencias otros valores que en cierto modo correspondían a los llamados patrimonios especiales, como el interés paleontológico, arqueológico o etnográfico. Por otra parte el carácter esteticista implicaba una declaración formal por parte de la Administración Monumental por lo que el Valor que se le otorgaba al Bien a proteger tenía un carácter extrínseco, dependía de una declaración administrativa, por lo que la valoración del legado patrimonial quedaba reducida a unas circunstancias sociales y culturales ajena a su propia naturaleza. El carácter formalista de la valoración de un bien no llegaría a ser superada hasta nuestros días, al considerarse el Valor intrínseco del Bien Cultural, por lo que cualquier obra de creatividad humana tenía en sí mismo una supuesta valoración que supondría una protección monumental.

José Ramos Illán y Pablo Roldán Verdejo enunciaron algunas consideraciones que el Derecho Administrativo define en relación al Valor Artístico y al Valor Histórico de los bienes que integran un Patrimonio Cultural. El Valor Artístico será enunciado como aquel que *corresponde a una*

---

<sup>1289</sup> El artículo fue traducido al español por I. Gallego Córcoles en el año 2005 en el número 9 de la revista Patrimonio Cultural y Derecho.

<sup>1290</sup> En la doctrina actual se intenta incluso diferenciar el llamado Valor Cultural con la dimensión histórica de un bien, como podemos apreciar en la tesis defendida por M<sup>a</sup> Jesús García García, quien afirma que lo cultural y lo histórico son dos dimensiones distintas del Patrimonio Histórico, que *confluyen en los bienes integrados en esta masa patrimonial. La manifestación cultural del mencionado patrimonio sería la consecuencia lógica de la historicidad inmanente a los bienes culturales, en tanto en cuanto que la procedencia del pasado, conlleva una información, sobre la forma de vida y evolución de las civilizaciones* (GARCIA GARCIA, M<sup>a</sup> Jesús, La conservación de los inmuebles históricos, 2000, p.26), tesis rebatida por Concepción Barrero, que perfila una semejanza conceptual entre lo histórico y lo cultural a la hora de la protección del legado patrimonial.

<sup>1291</sup> Giannini apela por la nueva concepción del valor cultural: *Mediante la adopción de un concepto que es a la vez omnicomprendido y definido, y que sustituye al criterio esteticista por un criterio histórico más exacto. Por todo ello, es necesario que quede claro que la identificación del bien cultural comporta siempre un juicio de valor. Incluso con el nuevo concepto, distinto y más preciso, el acto mediante el cual se declara que una cosa tiene valor artístico se funda en una instrucción procedimental que culmina con un juicio de valor. Lo que cambia es lo que podría llamarse las consideraciones culturales que intervienen en el juicio, que concernirán, según los casos a la historia del arte, o al arte, la historia, política o militar, literaria o económica, la etnología y así sucesivamente (...)* GIANNI, Máximo Severo, p.20



*obra de arte por sus valores estéticos, calidad de diseño o de concepción y de ejecución. Es independiente de su relación con personas o acontecimientos e incluso con su propio autor. Se trata, por tanto, de un valor intrínseco, mientras que el Valor Histórico carece de valor intrínseco, al ser proyectado por la relación de la obra u objeto con personas, acontecimientos o culturas*<sup>1292</sup>. Al mismo tiempo añaden como en muchas ocasiones ambos valores se han intentado unir en uno solo, con el término histórico-artístico, llevando a la confusión de atributos de muy diversas naturalezas<sup>1293</sup>. François Choay ya apuntó en su célebre obra *Alegoría del Patrimonio* como los humanistas descubrieron en las antigüedades los valores de lo histórico y lo artístico<sup>1294</sup>, y añade como en la *Ilustración de los dos valores descubiertos por los humanistas en las antigüedades –histórico o artístico- la mayoría de los anticuarios ha retenido sólo el primero y descuidado el segundo*. Durante el desarrollo del Estado Liberal asistimos igualmente a una divergencia entre lo artístico y lo histórico como valor, que en algunas veces se unirán en un mismo objeto, y en otras se rechazará, por lo que se complicará el fundamento valorativo a la hora de proteger un bien. En este sentido no **debemos olvidar** las discrepancias que van a existir entre los dos modelos de Academias que van a ir perfilando el valor de un bien: Las Academias de Bellas Artes y las Academias de la Historia. Probablemente sea el discurso axiológico de carácter nacionalista el punto de unión entre ambos valores. Lo estético irá adquiriendo un contenido ideológico de legitimación de los gustos específicos de la burguesía y lo histórico al mismo tiempo fundamentará las raíces de un pasado que se quiere recuperar como sustento del presente. No cabe duda que el valor artístico preside la fundamentación jurídica a la hora de proteger el legado patrimonial en el ordenamiento liberal<sup>1295</sup>. Sin embargo en relación a este

<sup>1292</sup> RAMOS ILLAN, José; ROLDAN VERDEJO, Pablo Julio, “Consideraciones sobre los valores históricos y artísticos en los bienes muebles e inmuebles”, *Revista de Derecho Urbanístico*, 106, 1988, pp.42-43. Podemos recoger algunas de las consideraciones que enuncian sobre el valor histórico y artístico en los bienes inmuebles: *La calificación de interés histórico-artístico referida a los inmuebles, ha sido establecida por las Administraciones Públicas con el fin de proteger a determinados de ellos, bien aisladamente o en conjunto, por considerar que presentan valores de una u otra naturaleza, que los hacen acreedores al interés general (...) Los valores históricos y artísticos pueden concurrir o no en un inmueble o en un objeto*.

<sup>1293</sup> RAMOS ILLAN, José; ROLDAN VERDEJO, Pablo Julio, 1988, p, 42: *Que el palacio Ducal de Venecia no solo tiene un valor histórico, sino también artístico, resulta evidente; no obstante, la casa natal de Edison, en Ohio, teniendo un interés histórico no resulta fácil atribuirle un valor artístico significativo*.

<sup>1294</sup> Choay subraya la impronta del humanismo en la configuración del Monumento Histórico Artístico: *En el escenario del Quattrocento italiano en Roma, los tres discursos de la perspectiva histórica, de la perspectiva artística y de la conservación contribuyen al surgimiento de un nuevo objeto que, aunque limitado a las antigüedades, por y para un público reducido a una minoría de eruditos, artistas y príncipes, no deja, sin embargo, de constituir el origen del monumento histórico*. p.46.

<sup>1295</sup> Concepción Barrero señala como del valor artístico tiene un hondo raigambre en nuestra historia jurídica, por lo que la determinación de cuando un bien presenta un valor de tal naturaleza es algo difícil de determinar a priori, y en consecuencia difícil, también, de



concepto, es necesario destacar nuevamente su carácter ajeno al mundo jurídico, por lo que fundamentar la protección de un bien por su valor artístico tendrá un matiz difuso, que en cierta manera sigue siéndolo en nuestra sociedad. En principio, la referencia al valor artístico o estético nos sitúa ante obras creadas por el ser humano cuya impronta lo fundamenta el sentido de la belleza como reflejo de la genialidad de su creador. Lo bello fundamenta lo estético y éste a su vez determina que bienes proteger y conservar. Sin embargo, el Valor Estético o Artístico no es homogéneo en todas las sociedades, sino su consideración dependerá de lo que entendamos por arte<sup>1296</sup>, por lo que como apunta Calvo Serraller el Valor Estético *está animado por una dinámica temporal de perpetuo cambio y esta dinámica de cambios no se produce solo mediante variantes estilísticas, sino que afecta a la definición misma de lo que es en cada momento el Arte*<sup>1297</sup>, subrayándolo la tesis de José Fernández Arenas al afirmar que *la obra de arte no puede definirse desde una determinada teoría de la belleza, porque la belleza no es una categoría única, sino múltiple, y tiene parámetros diferentes en cada cultura y está en función de variables antropológicas. Más que desde una teoría de la belleza, el arte debe definirse desde categorías y técnicas antropológicas*<sup>1298</sup>. Desde la teoría de la Restauración, Cesare Brandi precisó la dualidad de la obra de arte: *Como producto de la actividad humana, la obra de arte supone una doble exigencia: la instancia estética, que corresponde al hecho básico de la calidad de lo artístico por lo que la obra es obra de arte; la instancia histórica, que le concierne como producto humano realizado en un cierto lugar, y que se encuentra en un cierto tiempo y lugar*<sup>1299</sup>. En definitiva, como señala Concepción Barrero *no es posible una definición exacta y precisa del Arte, del valor artístico en el plano normativo, por tratarse de conceptos que ni siquiera cuentan con ella en el campo de aquellas disciplinas que hacen del mismo su objeto propio(...)* Al legislador y la Administración corresponde determinar, interpretando el sentir de la colectividad de cada momento, que bienes han de considerarse como tales en el plano normativo.

A pesar de la subjetividad que concierne la valoración de un bien como obra de arte, por lo que subyace un valor estético podemos precisar dos hechos primordiales a la hora de delimitar su contenido en el ámbito del ordenamiento liberal. La primera cuestión sería la impronta que las teorías estéticas van a tener a la hora de elaborar una conceptualización de la obra de arte. Sin entrar a delimitar una historia de la valoración estética en la cultura occidental, podemos precisar como durante el siglo XVIII se había articulado dos teorías

---

*precisar en el orden jurídico.* BARRERO, Concepción *La ordenación jurídica del Patrimonio Histórico* Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, p.176.

<sup>1296</sup> El concepto de arte tiene una connotación múltiple, por lo que la doctrina no ha definido unilateralmente una definición unívoca.

<sup>1297</sup> CALVO SERRALLER, F. *Orígenes y desarrollo de un género: la crítica de Arte*, en BOZAL, V., *Historia de las ideas estéticas y de las teorías estéticas contemporáneas*, Madrid, Visor, 1996, p.150.

<sup>1298</sup> FERNÁNDEZ ARENAS, José *Introducción a la conservación del Patrimonio y técnicas artísticas*, Ariel *Historia del Arte*, Barcelona, 1ª edición 1996, pp.10-11.

<sup>1299</sup> BRANDI, Cesare *Teoría de la Restauración*, Alianza Forma, 1988, p.15.

predominante sobre el gusto estético parecían incompatibles: o bien se consideraba al gusto como una función del entendimiento, y por tanto, participante de las necesidades del juicio científico, o bien se le consideraba como un sentimiento, y por tanto, concreto, arbitrario y contingente. Sería con Immanuel Kant cuando se delimita las primeras teorías de las ideas estéticas del pensamiento contemporáneo, al concebir que ni la belleza se podía aprehender y captar conceptualmente en cualesquiera determinaciones del objeto, ni una cosa podía ser ya considerada como bella por causar placer a cualquier persona o incluso a todos, contraponiéndose en este ámbito a las concepciones de la belleza de Hume que definía lo bello como la contemplación de un objeto que se identificaba con lo agradable<sup>1300</sup>. Los idealistas bajo las teorías de Hegel (1770-1831) en *Lecciones sobre la estética* de 1829, buscaron el sentido de la belleza en el idealismo, como expresión inherente al hombre que iba más allá de lo puramente material, que guiaba todas las acciones del ser<sup>1301</sup>. Durante el siglo XIX el Romanticismo y aportarían nuevas concepciones a la teoría de la belleza como fundamento de la estética. Como contraposición a lo bello, nacería la teoría de lo sublime. Sin embargo, las ideas estéticas no solucionan por sí misma el contenido metajurídico que subyace en el valor artístico como fundamento jurídico, por lo que al igual que ocurría en el ámbito de lo Histórico, el fundamento ideológico será determinante a la hora de solucionar el contenido del valor artístico. Y es que el Estado Liberal marcaría desde una política cultural de sentido nacionalista el concepto de la belleza, en la mayor parte de los casos, fundamentado en gustos historicistas. Desde esta perspectiva, las Academias de Bellas Artes, como instituciones administrativas del Estado, marcaron la línea del gusto estético desde su origen en la segunda mitad del siglo XVIII, perfilando una verdadera política oficialista que amparaba en la mayoría de los casos los intereses ideológicos del poder establecido, lo que supondría que solamente se insertaría en el legado patrimonial aquellos bienes del pasado histórico que respondiera a los intereses nacionales, por lo que se subjetivizó la juridicialización del sentido estético como fundamento protector.

La Antigüedad marcará la delimitación cronológica que tendrá su impronta en el ámbito legislativo. Lo Antiguo como Valor en un Bien llevará a la concepción de lo Histórico, que en sí misma encerrará un contenido semántico cambiante a lo largo de este periodo. Al igual que ocurre con el valor estético, el valor histórico se convierte en un elemento no ajeno al debate doctrinal, ya que su contenido semántico es muy amplio, por lo que a la hora de dotarle de un sentido jurídico se convierte en un factor ambivalente. En términos de Concepción Barrero *lo histórico sería aquello que forma parte de*

<sup>1300</sup> Los principios de la estética kantiana están recogidos en su obra *La Crítica del Juicio* de 1790, donde plantea sus teorías sobre el juicio sobre lo bello, un intento de conceptualización de los valores estéticos en la mentalidad moderna.

<sup>1301</sup> HAUSKELLER, Michael *¿Qué es el arte? Posiciones de la estética desde Platón a Danto*. Colección Tábano. 1ª edición: Marzo de 2008.

*la historia, aquello que por su trascendencia y significación es digno de figurar en ella, de ser recordado y valorado en cuanto tal; un bien tiene, en consecuencia, un valor de esta naturaleza, un interés histórico cuando incorpora una referencia, cuando es útil al conocimiento de la vida del hombre.* Sin embargo, lo histórico es un producto subjetivo de la sociedad, no es una materia perfectamente determinable, sino que por el contrario tiene una naturaleza maleable, que cambia en función a las interpretaciones que damos a la realidad que se describe<sup>1302</sup>. Esta multiplicidad de facetas del contenido histórico hace muy permeable el sentido jurídico de lo histórico, que como lo estético, se mueve en una dimensión meramente subjetiva. De ahí que surja al mismo tiempo una delimitación múltiple de la llamada conciencia histórica de una sociedad<sup>1303</sup>, una manera de concebir el pasado que se proyecta en el presente, por lo que nos introduce en un nuevo problema, la concepción del tiempo como realidad material que hace valorar los bienes que integran su legado.

A la hora de delimitar el concepto de tiempo, nos encontramos con la dificultad de dotarle de una definición unívoca, ya que desde todos los campos del saber humano, desde la Filosofía hasta la Física, se ha abordado su concepción desde múltiples puntos de vista. El tiempo a la vez que se puede medir, a través de innumerables fórmulas instrumentales, se puede percibir, es decir, utilizando la referencia semántica del tiempo como cambio, podríamos definirlo como aquella sensación dinámica de ritmo oscilantes en el paso

---

<sup>1302</sup>Pelai Peges precisa sobre el carácter de la Historia: *Definir la historia no es tarea fácil (...) Aunque pueda parecerlo, no se trata simplemente de un problema conceptual ni de un juego de palabras (...) El concepto historia incluye, pues, la realidad histórica tal y como objetivamente acaeció, y el conocimiento histórico, o sea la ciencia que pretende desvelarnos, mediante el trabajo del historiador, la realidad histórica. Ningún relato histórico se corresponde automáticamente con la realidad que trata de aprehender, aunque en cada narración histórica pueda existir una parte de esta realidad, una parte de esta realidad histórica. Planteada la problemática en estos términos, nos hallamos, pues, ante la existencia de una historia y de múltiples historias que pueden referirse al mismo objeto de estudio. Y ello es así porque, en las ciencias de la sociedad, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, el conocimiento es múltiple, tiene varias versiones y vertientes en la medida en que la propia historia de la humanidad está hecha por los hombres, y los hombres son múltiples, mientras la historia no depende de ellos.* PAGES, Pelai, *Introducción a la historia. Epistemología, problemas de métodos en los estudios históricos*. Barcanova, Temas Universitarios, 1983, p.11-12.

<sup>1303</sup>*La conciencia histórica. No es fácil definirla. Quizás podríamos hablar de aquellos reflejos o recuerdos del pasado que permanecen presente en la conciencia de los hombres (...) Existe una conciencia histórica de los acontecimientos vividos: se trata de aquellos antecedentes históricos inmediatos experimentados por sectores más o menos amplios –según el tiempo transcurrido– de la población, y que han dejado una huella determinada en el presente de un conjunto social. La conciencia histórica puede presentar, pues, una infinidad de formas y manifestaciones y, en la medida en que se integra en la conciencia social de los hombres, posee un claro contenido clasista: cada clase social sistematiza sus recuerdos del pasado en el marco general de su interpretación de la realidad y de su visión del mundo,* PAGÈS, Pelai, 1983, pp.73-74.

continuo de acontecimientos y la percepción de la misma nos lleva a su concepción histórica. Siguiendo a Ballart *La conciencia del paso del tiempo y con ella la conciencia de pasado, no es exactamente la idea del pasado (---) la consciencia del pasado se organiza en los seres humanos merced a una facultad extraordinaria de la mente humana, la facultad de recordar, de retener experiencias pasadas (...)* La consciencia humana en sociedad, no la consciencia individual, ha desarrollado dos nociones de tiempo, la del tiempo que pasa y la del tiempo que perdura. La consciencia del tiempo que pasa es propia de las culturas complejas y lleva directamente a la idea de historia. En cambio, la consciencia del tiempo que perdura, que se da en sociedades menos complejas, lleva al presente eterno, una especie de no tiempo que aparece en los mitos y en ciertas narraciones y en las representaciones de ritos litúrgicos<sup>1304</sup>, distinguiéndose entonces entre sociedades atemporales y temporales. Las sociedades temporales vendrán marcadas por un reconocimiento de su legado material, de su bagaje cultural, por lo que no es hasta la Revolución Francesa, cuando se va a producir este hecho.

La conciencia de un pasado en el seno de la sociedad, es una invención relativamente reciente, de la época moderna, originario en el siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa. Como apunta *el cambio se produce por una determinada separación o exclusión del pasado en el presente. Excluimos y negamos en nuestro presente la presencia invisible del pasado, - a diferencia de las sociedades tradicionales y del Antiguo Régimen en las que su pasado preside de forma inmaterial e invisible su presente-, y por ese mismo ímpetu y actitud de exclusión del pasado empezamos a acumular de él todos los restos materiales posibles, y lo convertimos en algo material y visible. Todas las sociedades tienen un pasado, y no por más visible más auténtico. Para las sociedades holísticas o tradicionales, su pasado, inmaterial e invisible (mitos, leyendas, prácticas, antepasados difuntos...), está omnipresente en su presente y es su única esperanza de continuidad y de futuro. Para nuestra sociedad industrializada, rota ya el hilo conductor con nuestro pasado y desorientados en el laberinto, nuestro pasado es a rehacer, a reconstruir (...)*. El valor histórico se instrumentaliza en el seno de las sociedades, se convierte en un elemento que da sentido a su propia realidad, por lo que irá cambiando al mismo tiempo que las circunstancias de la sociedad cambien, por lo que lo histórico como valoración no tendrá un carácter puramente homogéneo, algo parecido a lo que ocurría en el ámbito de la estética<sup>1305</sup>. Pierre Villar en su obra *Iniciación al vocabulario del análisis histórico* analiza las etapas de la historia como modo de conocimiento, analizando su paso de ser un género

<sup>1304</sup> BALLART, 2005, p.23.

<sup>1305</sup> Adolfo Gilly resalta el carácter instrumental de la historia y la impronta de los condicionamientos sociales y políticos: el conocimiento histórico es también, y antes que nada, un discurso histórico adaptado no a una acción única de la humanidad sobre la naturaleza, sino a diversas acciones de diversos grupos humanos sobre sí mismos y entre sí. GILLY, Adolfo, *Historia y poder*, en Nexos (México), nº 34, octubre, 1980, p.3.

literario a convertirse en una ciencia ya durante el siglo XVIII, con las aportaciones del italiano Gianbattista Vico y Voltaire en su obra *Nuevas consideraciones sobre la historia* (1744), quien planteará la importancia del acontecimiento frente lo anecdótico, siendo a finales del siglo con Condorcet en su *Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano* (1794), donde sienta el principio de la posibilidad de un conocimiento científico de los hechos humanos. Sería el siglo XIX el llamado siglo de la historia, es lo que definirá H.I. Marrou como el momento de la inflación de los valores históricos, debido al impresionante desarrollo de las técnicas históricas, arqueológicas y finalmente la aparición de las grandes historias nacionales<sup>1306</sup>. Lo histórico en la Ilustración mostrará la recreación de una sociedad clásica idealizada en sus concepciones estéticas y política. El Romanticismo buscará en lo histórico un pasado más cercano, de búsqueda de sus propias raíces que le de consistencia. Lo Histórico como fundamento de lo Nacional será constante en la propia conciencia social, como podemos observar en la propia consideración que hace Voltaire en 1744 del valor de lo pretérito para una nación al precisar como la historia *tratará de averiguar cuáles han sido el vicio radical y la virtud dominante de una nación*<sup>1307</sup>. Lo Histórico irá tomando identidad propia con la configuración de una historiografía científica que irá apartándose de planteamientos de carácter narrativo, donde los héroes y acontecimientos mitificados se habían convertido en los verdaderos sujetos protagonistas. Nietzsche ya definió en 1873 la diferenciación entre la historia monumental, anticuaria y crítica<sup>1308</sup>, a la misma vez que Hegel ya había definido anteriormente la dialéctica evolutiva del paso del tiempo. La irrupción del Positivismo reabre una nueva mirada de lo pretérito de una sociedad y le dará contenido, a través de la búsqueda científica del pasado histórico, y la corriente liberal fundamentará la legitimación de clase social emprendedora salida de la Revolución Industrial.<sup>1309</sup>

A pesar de la concepción esteticista que podríamos achacar a la valoración dada a los bienes del legado patrimonial, no tenemos que subsumir el papel que el ordenamiento jurídico liberal va a tener a la hora de configurar una verdadera valoración que le diera uniformidad y al mismo tiempo sirviera

---

<sup>1306</sup> VILLAR, Pierre *Iniciación al vocabulario del análisis histórico* Crítica, Barcelona, 1980/1990, pp.35-42.

<sup>1307</sup> VOLTAIRE, *Nuevas consideraciones sobre la historia* (1744), incluido en sus *Opúsculos satíricos y filosóficos*. Prólogo de Carlos Pujol. Madrid, Alfaguara, 1978, p.177.

<sup>1308</sup> NIETZSCHE, *Consideraciones intempestivas, Utilidad y perjuicio de la historia para la vida*, 1873, pp.97-98. *Si el hombre que quiere crear cosas grandes tiene en general necesidad de pasado, se apodera de él por medio de la historia monumental; quien por el contrario ama preservar lo tradicional y lo que es venerado desde hace mucho tiempo, cultiva el pasado como anticuario histórico; y sólo él, a quien un sufrimiento presente oprime el pecho, y que a toda costa quiere arrojar el peso de sí, necesita la historia crítica, es decir la que juzga y condena.*

<sup>1309</sup> W. Benjamin criticaría las posiciones positivistas y del propio historicismo en *Sul concetto di storia: Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido*; BENJAMIN, 1997, p.180



de fundamento jurídico a la hora de protegerlos. En muchos de los ordenamientos de la etapa liberal se puede deducir la existencia de un valor que tuviese alcance y que diera contenido legal a la hora de proteger a un bien, que superara una lectura simplemente de gusto estético. Y es que sin duda alguna se fue configurando una nueva valoración patrimonial, que podría ser denominada Valor Monumental, que en cierta forma subyace como fundamento jurídico en toda protección monumental. En una supuesta construcción dogmática sobre el Valor Monumental, nos podría ayudar el análisis de su contenido semántico, al referirse a cualquier objeto que nos evoque la memoria del pasado, sean bienes muebles o inmuebles<sup>1310</sup>. Una primera aproximación del Valor Monumental nos lo proporciona François Choay al afirmar que *en un primer término, el término Monumento denomina a todo artefacto edificado por una comunidad de individuos para acordarse de o para recordar a otras generaciones determinados eventos, sacrificios, ritos o creencias. La especificidad del monumento consiste entonces, precisamente, en su modo de acción sobre la memoria que utiliza y moviliza por medio de la afectividad, para que el recuerdo del pasado haga vibrar al diapasón del presente (...). Al relacionarse con el tiempo vivido y con la memoria constituye precisamente la esencia del monumento. El Monumento es, tanto para quienes lo edifican como para los que reciben sus mensajes, una defensa contra los traumatismos de la existencia, un dispositivo de*

<sup>1310</sup> El termino Monumento procede del latín monumentum, que significa lo que se recuerda, por lo que el Bien Material que es identificado como Monumento se irá identificado como soporte de valores del pasado. Jacques Le Goff en *El Orden de la Memoria* perfilaba el origen del término de Monumento: *La palabra monumentum está vinculada a la raíz indoeuropea men que expresa una de las funciones fundamentales de la mente (mens). El verbo monere significa "hacer recordar" (LE GOFF, Jacques Le El orden de la Memoria Paidós Ediciones, S.A. España, 1991 (1977), p.227). Marc Augé por su parte señalaba que el monumento, como lo indica la etimología latina de la palabra se considera la expresión tangible de la permanencia o, por lo menos, de la duración MARC AUGÉ Los "no" lugares. Espacio del anonimato. Gedisa Editorial. España, 1995 (1992), p.65. La expresión moderna del término ya empieza a ser utilizada desde finales del siglo XVII, cuando en 1689 Antonie Furétiere lo define como testimonio que nos queda de algún gran poderío o grandeza de los siglos pasados. Las pirámides de Egipto, el Coliseo, son hermosos monumentos de la grandeza de los reyes de Egipto, de la república romana. Bernard de Montfaucon en su obra los Monumentos de la Monarquía francesa (1729-1773) los definiría como estatuas, relieves, pinturas, manuscritos, textiles, medallas monedas, gemas, tumbas, regalía, etc. El concepto perfectamente delimitado aparece sin duda por primera vez cuando en el contexto de la Revolución Francesa Aubin-Louis Millín inserta los instrumentos que debían ser utilizados para una mejor conservación, distinguiendo entre monumentos literarios (diplomas, inscripciones), de arte (arquitectura, escultura, pintura), mecánicos (utensilios, armas). Quatremère de Quincy designaba al Monumento como un edificio construido sea para eternizar el recuerdo de cosas memorables, sea concebido, edificado o dispuesto para llegar a ser un agente de embellecimiento y de magnificencia en las ciudades. Anteriormente en su obra Recueil d'Antiquités nationales (1790) será el primer anticuario que defina el concepto de Monumento Histórico, por lo que se producirá la distinción entre Monumento Histórico y Artístico: al definirlo como aquellos edificios pero también tumbas, estatuas, vidrieras, todos los que se puedan fijar, ilustrar y precisar la historia nacional*



*seguridad*. El carácter evocador del pasado que alude la valoración del objeto será el nexo conductor de la protección monumental en el ordenamiento liberal.

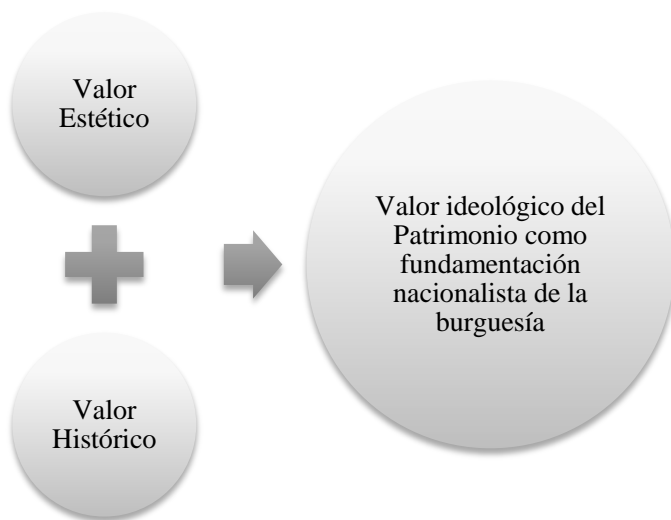
A la hora de delimitar el Valor Monumental, podemos observar como subyace unas connotaciones indudablemente ideológicas, que en cierta forma se convierte en el punto de partida de su construcción dogmática, aunque en cierta forma podemos afirmar que va ser algo común a la hora de valorar un patrimonio. Si entrar en una discusión historiográfica sobre la preeminencia del valor de un objeto en el seno de una sociedad humana, podemos precisar como el valor ideológico fue perfilando el resto de los valores que configuraron la axiología patrimonial en las sociedades modernas<sup>1311</sup>. El Valor ideológico en principio no es un valor directamente recogido en el ordenamiento jurídico, pero en la lectura de los distintos ordenamientos subyace una clara orientación ideológica que fundamenta la protección de un conjunto de bienes que legitimará el carácter del grupo social dominante, derivándose en la construcción dogmática del llamado Patrimonio como Identidad. La Sociología ha definido al Patrimonio como identidad a aquel *Conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen herencia de un grupo humano y que refuerzan emocionalmente su comunidad con su identidad propia y que son percibidos por otros como característicos*<sup>1312</sup>. Llorenç Prat subraya la identidad del

---

<sup>1311</sup> En una Historia de las Valoraciones de un Bien Patrimonial el arquitecto Roberto Fernández apunta como *en las grandes culturas clásicas tanto el aislamiento (en el caso de las orientales y americanas), la autoafirmación de un ideal de belleza (en el caso griego-helenístico), y la voluntad sincrética imperialista (en el caso romano)*, les llevaría a carecer una conciencia histórica del monumento (cfr.FERNANDEZ, Roberto *Notas para una introducción a la teoría y práctica restauradora* en CLEMENTE, Carlos (Coord.), *Teoría e Historia de la Restauración*, Universidad de Alcalá p.55.). la historiadora María Dolores Ruíz de Lacanal apunta que en las sociedades medievales se valoraba al bien por su función religiosa (Valor Ideológico), en el Renacimiento se perfilaría el valor artístico (Valor Estético), y ya en el siglo XVIII con la época de las Luces se apreciaría el valor arqueológico entendido como valor histórico y documental de los objetos del pasado. Con la llegada de las sociedades liberales asistimos a un cambio profundo en la valoración del patrimonio a proteger En opinión de I. González Vara en la valoración del Patrimonio Histórico-Artístico se aprecia tres hechos fundamentales: a) Una interpretación ideológica o espiritualista que dotaría a los monumentos del pasado de una fuerte carga emocional y simbólicas, al considerarles como manifestaciones gloriosas de la cultura nacional (Valor Ideológico); b) Un progresivo interés turístico por conocer el patrimonio cultural de cada país, que difundió gracias a la moda de los viajes pintorescos y a la publicación de numerosos libros y revistas ilustradas, configurando a los monumentos como estudio literario, histórico e iconográfico y un 3º) El desarrollo de la historia del Arte como disciplina científica por el estudio de los monumentos, tanto en sus aspectos estéticos como testimoniales, ideológicos, culturales, etc. (GONZALEZ VARAS, I. *Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas*. Madrid, Cátedra, 2000).

<sup>1312</sup> La Sociología ha ido aportando a lo largo de su historia varias definiciones sobre la concepción de las identidades colectivas, recientemente definido por Alberto Melucci en su obra *Challenging Codes* (2000), quien lo concibe como un conjunto de prácticas sociales que involucran simultáneamente a cierto número de individuos o de grupos; exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial (...),

patrimonio al señalar que *La historia del patrimonio cultural es distinta de la de los objetos que forman parte de él, la postura contraria es anacrónica puesto que está tratando con realidades dispares: los tesoros de los monarcas de la antigüedad, la biblioteca de los monasterios benedictinos o los gabinetes de curiosidades ilustrados son realidades diversas entre sí y distintas de lo que hoy entendemos por patrimonio. El factor determinante que define lo que actualmente entendemos por patrimonio, es su carácter simbólico, su capacidad para representar simbólicamente su identidad*<sup>1313</sup>. No podemos afirmar que todas las sociedades la posean, se tienen que dar unos condicionantes básicos para ellos, fundamentados en la conciencia del paso del tiempo, que nos llevará a la conciencia del pasado, que derivará en una modalidad específica en la concepción del Patrimonio como identidad. Muy cercano a lo Ideológico estaría el valor religioso, que en muchos momentos de la historia de la civilización occidental se convirtió en uno de los pilares primordiales a la hora de fundamentar la protección monumental, más aun cuando la vida social estaba fundamentada en la sacralización de su forma de vida. Lo religioso había impregnado todas las relaciones sociales, las manifestaciones de la creatividad humana, e incluso todo horizonte de vida en la sociedad barroca, por lo que iría perdiendo fuerza con el triunfo de la sociedad civil en la etapa liberal.



El ideal del nacionalismo político impregnaría la identidad cultural de la comunidad de ciudadanos que formarían parte de la comunidad política a la que pertenecieran. Inman Fox nos daría la clave del papel de la cultura en el nacionalismo liberal-burgués nacido en estos años: *el concepto de cultura (...) no es el que se deriva, en los círculos antropológicos, de la vida social o una teoría sobre la manera en que un grupo de personas se comporta de hecho, ni en la herencia social que adquiere el individuo de su grupo. Es más bien la*

<sup>1313</sup> PRATS, Li *Antropología y patrimonio* Barcelona, 1997.

*interpretación de una manera de pensar, sentir y creer: interpretación que depende de productos culturales -la historia, la literatura o el arte- (...). De esta manera el legado patrimonial se convierte en un instrumento vital para la construcción de este nacionalismo político, por lo que se debe de rebuscar en sus raíces históricas el fundamento político de la nueva identidad colectiva, o sea la nación: El concepto de historia general se establece en casi todos los países europeos con el Estado liberal moderno. Esta nueva historia nacional, que obedece al traspaso de la soberanía del monarca al pueblo, a la sustitución de la legitimidad dinástica y divina por la legitimidad popular, uno de los grandes cambios políticos de la era moderna. Por ello, se escribe desde la perspectiva del liberalismo que consideran al pueblo sujeto político activo, así como desde la de todo lo que el nuevo orden representaba: la secularización de la sociedad (...)*<sup>1314</sup>.

## **2. Los derechos patrimoniales como marco jurídico del derecho del patrimonio monumental en el Estado Liberal.**

### **2.1. El derecho de la propiedad como principio jurídico del ordenamiento liberal.**

#### **2.1.1. El derecho de la propiedad privada como categoría absoluta en el ordenamiento liberal.**

El desmantelamiento del Estado Absolutista producido en los distintos procesos revolucionarios europeos y la irrupción del liberalismo como nueva expresión política-económica, va a dar lugar a un nuevo escenario en la historia de los derechos y libertades fundamentales, forjado especialmente en los intereses de un individualismo burgués, que intentará suplir las carencias de su capacidad jurídica que había tenido que soportar en el ordenamiento estamental. Como apunta Manuel García Pelayo, *hay una conexión evidente y general entre el sistema de valores liberal y la autonomía jurídica liberal que forma el núcleo del Derecho privado. Empleando la terminología de Radbruch diremos que lo que ahora hace su aparición es una concepción personalista del Estado y del Derecho frente a la transpersonalista que le había precedido (...)* El Estado se justifica ahora por su función de garantizar la esfera de la libertad personal que se despliega en unos derechos individuales. No es que estos derechos individuales se agoten en el Derecho privado, pero sí que la autonomía jurídico-privada es elemento esencial de esa esfera de libertad individual que constituye el principio, el fin y la justificación del orden jurídico político-liberal. Y esto, tanto en el aspecto sociológico –la propiedad y la libre disposición sobre los bienes, forma el supuesto de todo este complejo- como en el puramente jurídico, pues sólo mediante ella se produce el ser autónomo que

---

<sup>1314</sup> FOX, Inman, 1997, pp.24-25.

*es supuesto de tales derechos*<sup>1315</sup>. En este complejo jurídico individualista del Estado Liberal, el derecho de la propiedad será sin duda uno de los pilares primordiales del nuevo eje ordenador de los sistemas normativos europeos, inherente a la naturaleza del propio individuo, inviolable, e inaccesible por si mismo. El problema reside en que este absolutismo dogmático de la propiedad termine convirtiéndose en un obstáculo para los intereses de la comunidad. Una primera cuestión que va suponer un problema vital en la doctrina jurídica y en los propios ordenamientos liberales va a ser la propia conceptualización del derecho de la propiedad, debate que en la actualidad no ha sido aplacado, por la imposibilidad de intentar delimitar su contenido en una sola definición, que por lo demás probablemente quedaría incompleta, ya que dicho concepto cambia en función a la contextualización jurídica, social y política en que nos movamos<sup>1316</sup>.

Díez-Picazo al respecto señala como *La propiedad y su regulación jurídica en gran medida no es más que una superestructura de las ideales sociales, políticas y económicas que en un periodo determinado sacuden las naciones. De ahí que una definición legal de la propiedad esté siempre influida por el ambiente histórico en que se formula*. En un rápido repaso a la historia jurídica de la propiedad privada se puede apreciar como es tradicional por la doctrina señalar la irrupción del artículo 544 del Código Napoleónico el momento primordial de la consagración de un derecho de la propiedad privada, que impregna posteriormente a los constitucionalismos de principios del siglo XIX<sup>1317</sup>. Ruiz Jiménez ya ve indicios de la existencia de la propiedad privada desde la etapa grecolatina, en la que ya aprecia una creciente extensión de las formas de la propiedad individual y un refuerzo de las atribuciones y facultades del dueño, frente a los demás hombres y frente al Estado, siendo en la Edad Media cuando se va a ir produciendo un proceso de desintegración del concepto unitario de la propiedad, forjado por la jurodisprudencia romana, con

<sup>1315</sup> GARCIA PELAYO, Manuel, Derecho Público, en *Obras Completas*, Tomo III, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, p.2352. Fue publicado originariamente en *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Ed. Seix, Barcelona, 1950, T.1, p.990.

<sup>1316</sup> Como apunta Javier Barnes Vázquez *parece evidente que no existe quizás otra institución en el ordenamiento que más interés haga converger ni que más polémicas polarice que la dominical. De este modo, el campo de investigación deviene, con frecuencia, en terreno pantanoso*. BARNES VAZQUEZ, Javier *La propiedad constitucional. El estatuto jurídico del suelo agrario*. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Editorial Civitas, 1988, p.96. A pesar de ello, destacamos algunas tesis del profesor Pérez Nuño, quien señala como en un sentido jurídico, la propiedad designa en principios un derecho, que va a ser atribuido por el propio poder político y que va a ir siendo paulatinamente fundamentado en un sistema normativo. Pérez Nuño señala algunos aspectos en la formación histórico-conceptual en el derecho de la propiedad, que ya se perfilan en el propio Estado Liberal, comenzando por el propio sentido semántico del término, al sugerir un significado multívoco y equívoco de la expresión, no unívoca, que lo entrelaza con su identidad cambiante, y al mismo tiempo al designar una diversidad de cosas que pueden constituir su objeto. PEREZ LUÑO, Antonio Enrique *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Tecnos, 9ª. Edición, 2005, pp.442-444.

<sup>1317</sup> GULLON Y DIEZ PICAZO, *Sistema de Derecho Civil*, Madrid, 1990, Tomo III.

desdoblamientos de facultades entre el titular del dominio y el efectivo poseedor, al mismo tiempo que van surgiendo algunas formas colectivas o comunales de propiedad. Sin embargo, señala que la concepción de un derecho a la propiedad individual y libre y su inviolabilidad y permanencia frente al Estado, surgiendo con la irrupción del Renacimiento<sup>1318</sup>.

El desarrollo del liberalismo económico y las doctrinas iusnaturalistas marcará el triunfo definitivo del derecho de la propiedad en la tradición jurídica europea, quedándose incluido en los llamados derechos humanos de la primera generación<sup>1319</sup>, que quedará a su vez resquebrajada en el momento en que se ponga en entredicho el papel que juegue en el seno de la sociedad, abriéndose el escenario hacia la funcionalidad social de la propiedad con la crisis del Estado Liberal. El nuevo enfoque dogmático del derecho de la propiedad privada en el Estado Liberal lo recoge Bassol Coma en los siguientes términos: *El carácter inviolable de la propiedad inmunizaba a la institución frente a las intromisiones del poder estatal, a excepción del supuesto extremo de la expropiación justificada por razones de utilidad pública, y su condición de auténtico derecho civil le otorgaba una legitimidad basada en la ley frente a los antiguos privilegios, a la par que permitía presentarse como un modelo unitario y universal de goce y disposición sobre todo tipo de bienes (muebles, inmuebles, inmateriales e intelectuales). La dogmática civilista proyecta esta ideología(...) erigiendo a la propiedad en la encarnación y representación del derecho subjetivo por antonomasia y con capacidad de exclusión de los intereses de terceros y de la propia sociedad, a excepción de los tasados supuestos de la expropiación*<sup>1320</sup>. Rosa Congot añade a la nueva concepción del derecho de la propiedad del nuevo régimen liberal: *Convertir los antiguos derechos señoriales en derechos de propiedad particular no significa cambiar la naturaleza de estos derechos o su forma de percibirlos. Por eso no puede decirse ni afirmarse que antes de la revolución liberal la propiedad era dividida, colectiva, servil y después surgió una nueva propiedad plena, individual y libre. No radicaba aquí el cambio. El hecho significativo es que en un contexto de cambio y de esperanzas de cambios legislativos, aquellos viejos derechos, fueron declarados sagrados, es decir, intocables (...) En el terreno del discurso político, éste era la novedad: convertir la propiedad en una abstracción, en un nuevo dios. Se trataba de conseguir que las relaciones entre los hombres, las relaciones sociales se hallasen condicionadas y*

---

<sup>1318</sup> RUIZ GIMENEZ, *La propiedad, sus problemas y su función social*. Ediciones Anaya, S.A., Madrid, 1961, Vol.1. pp.33 y ss.

<sup>1319</sup> Como señala Alicia H. Puleo *es ya habitual la clasificación que diferencia al menos tres generaciones de derechos humanos, atendiendo al orden cronológico de su teorización y reivindicación así como al diferente valor que los inspira. Los derechos civiles y políticos constituyen los que se han dado en llamar primera generación de derechos humanos. Fueron formulados por la escuela de derecho natural en los siglos XVII y XVIII. La segunda generación enuncia los derechos sociales y económicos, originados en el siglo XIX (...).* PULEO, Alicia H. *Los derechos humanos. Un legado de la humanidad* en QUESADA, Fernando, *ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política*. Madrid, 2008, Editorial Trotta, pp.186-187.

<sup>1320</sup> BASSOLS COMA, Martín *Constitución y sistema económico*. Temas clave de la Constitución española, Editorial Tecnos, 2ª edición, 1988, pp.113.



*subordinadas a la propiedad. La misma existencia de la sociedad dependía del respeto absoluto a la propiedad*<sup>1321</sup>.

En principio, parece que el énfasis del derecho de propiedad estaba como apunta González García en su oponibilidad: la facultad de excluir a los demás del ámbito del disfrute del objeto<sup>1322</sup>. Lo que no cabe duda es que uno de los contenidos esenciales del derecho de la propiedad privada era su derecho de disposición, que lo convertía en un bien libre de toda atadura vinculadora con ningún tipo de prerrogativa estamental, por lo que se supera la idea de una propiedad estamental basada en la herencia, en las rentas fijas de un producto, propio del Antiguo Régimen. La nueva sociedad nacida al amparo de la Revolución Industrial no se podía basar en la inmovilidad de una propiedad vinculada a un linaje, sino que por el contrario se busca un nuevo sistema de posesión en que los bienes puedan circular libremente de unas manos a otras, aunque respetando siempre la voluntad de los propietarios, que son los que en cierta manera en principio delimitarán el destino de dichos bienes. Montes sintetiza la cuestión: *En la tesis clásica, liberal, la propiedad era una situación de poder, cuya actuación o realización se confía al arbitrio del titular, es decir, existiría un derecho abstracto, general y teórico consistente en el poder de la utilización de una determinada cosa para la finalidad u objetivo que se proponga el titular dominical. La propiedad, en este contexto, es una situación activa, de poder, que constituía el derecho subjetivo por excelencia y cuyo contenido se traducía en gozar y disponer del bien*<sup>1323</sup>. Jose Eugenio Soriano matiza aun más: *El dominio, en el pensamiento clásico, no es meramente la suma de las facultades que lo componen. Es una situación de poder sobre una cosa. No existe así un dominio gradual: o se es o no se es propietario. Y si se es, ciertamente se puede genéricamente clasificar su contenido en las facultades de goce y disposición como descripción global y más general, pero sin que de ahí quepa construir una escala gradual de facultades que irían integrando el dominio. No existe posibilidad de descomposición del dominio en un mero haz de facultades más o menos precisadas*<sup>1324</sup>. El nuevo propietario asume desde este momento un nuevo perfil jurídico, como bien define Rafael Colina: *Así pues, el propietario liberal actúa como soberano respecto a los bienes que constituyen el objeto de su derecho, porque se le concede la facultad de decidir libremente sobre el uso o destino económico que se puede aplicar a los mismos. El titular dominical es libre de hacer lo que considere conveniente con las cosas que le pertenecen, pudiendo abandonarlas, dejarlas estériles e improductivas, conservarlas, enajenarlas a título oneroso o lucrativo, modificar su estructura, o incluso*

<sup>1321</sup> CONGOST, Rosa Tierra, *Leyes, Historia. Estudio sobre la gran obra de la propiedad*. Editorial Crítica, Barcelona, 2007, p.154.

<sup>1322</sup> GONZÁLEZ GARCÍA, *La facultad exclusiva del propietario*. Granada, Universidad de Granada, 1986, p.43.

<sup>1323</sup> MONTES, 1980, p.67.

<sup>1324</sup> SORIANO GARCÍA, Eugenio *Hacia la tercera desamortización (Por la reforma de la ley del suelo)*, IDELCO, Marcial Pons, Madrid, 1995, p.46.



*eventualmente destruirlas (...) En suma, tener un derecho de propiedad es tanto como disponer de la autoridad necesaria para decidir soberanamente sobre el uso, afectación y disposición del bien que es objeto de ese derecho. En tal grado depende el ejercicio de las facultades dominicales de la voluntad individual del titular, que se puede aseverar que, en el orden liberal, la propiedad es al individuo lo que el imperio al soberano(...) Al igual que el monarca absoluto en el Antiguo Régimen ejercía una plena soberanía sobre su reino, el propietario, en el orden liberal, se ve investido de un poder omnímodo que le permite proyectar libre y discrecionalmente su voluntad sobre los bienes que le pertenecen, sin estar sometido a ningún tipo de traba que condicione el ejercicio de las facultades que se le atribuyen*<sup>1325</sup>.

El derecho de la propiedad será recogido tanto en el constitucionalismo decimonónico como en los procesos de codificación civil, que parafraseando a Bassol podríamos apuntar como *mientras la Constitución garantizaba la propiedad de los ataques externos procedentes de los poderes estatales, la Codificación civil desde su concepción individualista la liberaba definitivamente de los vínculos feudales y facilitaba su inserción en el proceso productivo, pudiéndose afirmar que el movimiento codificador cumplió la función de autentica Constitución material de la propiedad y en definitiva, del orden económico*<sup>1326</sup>. Así de esta manera, el derecho de la propiedad entra a formar parte de los principios jurídicos primordiales del ordenamiento constitucional. El derecho de la propiedad a su vez aparecía insertado en el seno del derecho a la libertad, de tal manera que en la doctrina jurídica liberal libertad y propiedad se convierte en los derechos primordiales inherentes a todo ciudadano, como aquel individuo que reúne las condiciones sociojurídica establecida en el ordenamiento jurídico para alcanzar el status político. Pietro Costa al analizar la evolución que fue teniendo el corpus de derechos y libertades en el proceso de construcción del Estado Liberal, señala como la libertad y la propiedad como los pilares jurídicos fundamentales. Así ya en la obra de John Locke de 1690, el capítulo II del *Segundo Tratado sobre el Gobierno*, y en el propio artículo 2 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se sitúan al mismo nivel la libertad y la propiedad. De ahí que durante el primer liberalismo Propiedad y Libertad se convierten en la misma cara de una misma realidad jurídica, no existiendo por consiguiente una separación entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales, por lo que como señala Carlos Lasarte *se consideraba que la finalidad principal radicaba en la libertad individual mientras que la propiedad venía a constituir un colofón de aquella o, en todo caso, un baluarte defensivo que, en lucha con los demás, se transformaba en un elemento de protección de la propia libertad: la propiedad individual (...) En consecuencia, una vez abandonada la concepción estamental de la propiedad, por obra y gracia de la Revolución Francesa, los dos polos del binomio libertad-propiedad se elevan rápidamente a la categoría de ideales, adquiridos por cada individuo, que*

---

<sup>1325</sup> COLINA GAREA, Rafael, *La función social de la propiedad privada en la constitución española de 1978*, J.M. Bosh Editor, Barcelona, 1997, pp.83-84.

<sup>1326</sup> BASSOLS COMA, Martín, 1988, p.113.

posibilitarán, por fin, la igualdad social<sup>1327</sup>. La nueva propiedad jurídica como apunta Carlos de Cabo Martín, es en adelante, una propiedad despersonalizada, porque está separada del sujeto, que cobra independencia como categoría jurídica; y al estar despersonalizada, se reduce a puro objeto y, por tanto, a objeto disponible, o, lo que es lo mismo, enajenable y convertible en mercancía<sup>1328</sup>.

Es en este punto donde algunos autores, como Luigi Ferrajoli, ha señalado la inexactitud de la construcción jurídica del derecho de la propiedad en el sistema normativo liberal: *La mezcla en una misma categoría de figuras entre sí heterogeneas como los derechos de libertad, de un lado, y el derecho de propiedad del otro, fruto la yuxtaposición de las doctrinas iusnaturalistas y de la tradición civilista y romanista, es, por tanto, una operación originaria, llevada a cabo por el primer liberalismo, que ha condicionado hasta nuestros días la teoría de los derechos en su totalidad y, con ella, la del Estado del derecho. En su base hay un equivoco, debido al carácter polisémico de la noción derecho de propiedad con el que se entiende al mismo tiempo el derecho a ser propietario y a disponer de los propios derecho de propiedad, que es un aspecto de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar reconducible sin más a la clase de los derechos civiles, y el concreto derecho de propiedad sobre este o aquel bien. Como se advierte fácilmente, una confusión que además de ser fuente de un grave equívoco teorico, ha sido responsable de valorizar a la propiedad en el liberalismo como derecho al mismo tiempo que la libertad. Y es que la libertad y propiedad se traducirían en los llamados derechos fundamentales y derechos patrimoniales<sup>1329</sup>*. La crítica de Ferrajoli se refería a la confusión que se va a ir produciendo entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales, y la consiguiente necesidad de una separación entre ellos: *La propiedad, como el crédito y el resto de los derechos patrimoniales, no es, ciertamente, universal, en el sentido en que lo son todos los derechos de la personalidad y de la ciudadanía, sean éstos humanos, civiles, políticos o sociales. La propiedad es un derecho que por su propia naturaleza existencial, no corresponde a todos, dado que cada individuo, puede ser o no titular y, de serlo, lo es con exclusión de los demás. Pero no sólo esto. A diferencia de todos los derechos de la persona y del ciudadano, que son derechos indisponibles e inalienables –sustraídos tanto al mercado como a las decisiones de la mayoría- y como el resto de los derechos patrimoniales, la propiedad es, por su propia naturaleza, un derecho disponible, es decir, alineable, negociable, transigible. A lo que añade: los derechos patrimoniales, al tener un objeto consistente en un bien patrimonial, se adquieren, se cambian, se venden. Las libertades, por el contrario, no se cambian, ni se acumulan (...) Que los derechos fundamentales son indisponibles quiere decir que están sustraídos tanto a las decisiones de la política como el mercado(...)son singulares en la medida en que puede ser objeto de cambio en la esfera del mercado<sup>1330</sup>*.

<sup>1327</sup> LASARTE, Carlos *Propiedad y derechos reales de goce. Principios de Derecho Civil IV*, Marcial Pons, 9ª edición, Madrid, 2009, pp.37-38.

<sup>1328</sup> DE CABO MARTIN, Carlos, *Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución*. Editorial Trotta, Madrid, 2010, p.37.

<sup>1329</sup> FERRAJOLI, Luigi *Derechos y garantías*. Editorial Trotta, 2009, pp.45.

<sup>1330</sup> FERRAJOLI, L., 2009, pp.46-47

Los Códigos decimonónicos van a recoger el sentido individualista del Derecho Romano, a través de las adaptaciones e interpretaciones varias de los Glosadores, apoyadas por las tendencias filosóficas del *jus naturalismo* y considerar a tal derecho, junto con el de la libertad, la proyección esencial de la existencia de todo individuo, por lo que la libertad y la propiedad se convierten en un mismo ente unido. La influencia del comentario de la Glosa sería determinante en la aparición del Código francés de 1804 en su artículo 544 en la que se va a ir definiendo ya el derecho de la propiedad privada, por lo que se introduce la definición del binomio Goce-Disposición. De ahí que, como señala Luis A. Anguita Villanueva, sin un régimen de poder gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta no hubiera sido posible el funcionamiento social y económico generado en el siglo XIX con los regímenes liberales, subrayando *que para los operadores económicos burgueses la libertad es función social y el ejercicio incondicionado de los poderes del dueño cumple una misión de tutela del interés público, integrando perfectamente ambos intereses en la persona del propietario. La única limitación a la propiedad privada era no poder limitarla*, por lo que de esta manera se considerará una sociedad más libre aquella que irá recogiendo en suma mayor potestad al propietario privado en función a su bien adquirido. En todos los ordenamientos sectoriales socio-económicos el derecho de la propiedad privada marcaría el fundamento de su regulación. Se convierte por consiguiente en uno de los derechos fundamentales del sistema de derechos individuales liberales, por el que se le otorga un derecho absoluto en cuanto otorga un poder ilimitado, soberano sobre la cosa; exclusivo, en cuanto que facilita y faculta para impedir el goce por los demás y perpetuo en cuanto no se está sujeto a limitación de tiempo y puede durar tanto cuando la cosa, en tanto esta no se consume, desaparezca o cambie de titular el derecho de la propiedad. El derecho de la propiedad y el status jurídico del propietario como sujeto político social en el Estado Liberal lo sintetiza Pietro Barcellona en los siguientes términos: *Hay que de la propiedad un objeto de derecho, mercancía para el mercado, res que puede ser libremente puesta en circulación y alineada. Es necesario que la propiedad se vuelva abstracto dominio individual y solitario, confín espacial del dominio que el individuo tiene esencialmente sobre sí (...) Pero esta propiedad que progresivamente se va abstrayendo y liberando, que se convierte en abstracta apropiabilidad/alienabilidad, esta propiedad que circula libremente en el mercado, es también el poderoso medio a través del cual es posible generalizar la cualificación del sujeto jurídico como sujeto abstractamente propietario. Respecto a la subjetividad abstracta, en efecto, la propiedad deja de ser una cualidad personal y se convierte en una forma de la misma subjetividad que puede estructurarse como actividad abstracta y potencial a disponer de las cosas que constituyen el objeto de los derechos. A la abstracción de la propiedad corresponde la abstracción del sujeto, y sólo esto hace posible la transformación del individualismo posesivo originario en una forma general de organización de la sociedad: la sociedad de los propietarios libres e iguales. También aquí reconocemos una paradoja de la constitución de la*

*modernidad, que solo la subjetividad jurídica abstracta consigue mediar: la propiedad identificada como componente constitutivo del individualismo(...)*<sup>1331</sup>.

No cabe duda es que el derecho de la propiedad privada no quedaría solamente insertada en un derecho más del ordenamiento jurídico liberal, sino que si proyección fue determinante a la hora de construir el orden social y económico de la Europa del siglo XIX, cuyo análisis sería prácticamente inabarcable en la exposición de este trabajo, pero que podríamos precisar en dos puntos determinantes: 1º) La condición social de propietario y los derechos políticos y sociales adheridos al mismo. En las teorías fisiocráticas del siglo XVIII, ya se aprecian la defensa de una vinculación entre la representación política y el derecho de la propiedad, por lo que se defendía la sustitución de una separación estamental por una división de clases en función a la capacidad de adquisición de bienes materiales por parte de un individuo, o lo que es lo mismo, el haber adquirido la categoría social de propietario. Las teorías económicas liberales van a plasmar esta nueva concepción limitadora de la participación pública de la totalidad de la población, al reducir solamente a los propietarios privados, fundamentándose para ello en la idea política de que quienes participan en la creación de riqueza gozan de una verdadera implicación o interés social. Guizot llegaría a afirmar que era la nueva propiedad la que generó conciencia y aprehensión acertada de la realidad<sup>1332</sup>. De esta manera el ciudadano-propietario se convierte en el sujeto político del nuevo orden constitucional del Estado Liberal. Como afirma los nuevos Estados se fundamentarían *tanto en el concepto de ciudadanía como en el de propiedad. Socavaron y subvirtieron la legitimidad teocrática del Antiguo Régimen y de las monarquías absolutas. Las teorías del pacto social y del contrato adquirieron carta de naturaleza. El sujeto de tales teorías fue el individuo libre e igual. Pero sobre todo el individuo propietario, porque la propiedad fue la condición básica requerida para ser considerado ciudadano con todas sus capacidades en las nuevas comunidades políticas establecidas (...)*.

<sup>1331</sup> BARCELLONA, Pietro *El individualismo propietario*, Editorial Trotta. Madrid, 1996.

<sup>1332</sup> La condición social del propietario como sujeto activo en la participación política del Estado fue construida en las teorías aportadas por los revolucionarios franceses, especialmente por Sieyès, por lo que solamente los ciudadanos recogerían las tres cualidades que garantizan que los intereses de la comunidad cívica este bien defendidos. En primer lugar, el propietario es un hombre económicamente independiente, en cuanto elector y/o elegido, no buscará pues defender tal o cual interés particular, sino que podrá determinar sus opciones y actos mejor que nadie en función del interés colectivo de su comunidad cívica. Y lo hará tanto mejor por el hecho de disponer de ingresos que no son fruto directo de su propio trabajo, lo cual le deja suficiente tiempo libre para dedicarse con toda la seriedad necesaria a las tareas que incumben a cualquier elector responsable y, todavía más, a cualquier elegido. En segundo lugar, la propiedad favorece la adhesión de los individuos a su patria. Por un lado, el propietario no puede permanecer indiferente a los intereses colectivos de la nación a la que pertenece, pues en cuanto poseedor, se siente directa y personalmente concernido por la prosperidad de la nación. Por otra parte, la propiedad favorece la estabilidad y el arraigo de los individuos en la sociedad local. NOIRIEL, Gérard, El ciudadano, en FREVERT, Ute y HAUPT, Heinz-Gerhard (edición de), *El hombre del siglo XIX*, pp.249-250.

2º) El régimen de la propiedad privada se irá proyectando en algunos sectores del ordenamiento jurídico, especialmente en el proceso de la codificación civil, donde se plaman los derechos y libertades de los individuos del nuevo orden constitucional del Estado Liberal, aunque en la práctica serán los principales beneficiarios los ciudadanos-proprietarios, a los que habría que unir los regímenes especiales de la propiedad agrícola, la minería, etc. La actitud del propio Estado con respecto a la construcción del orden político. El Estado no interventor en el orden social y político, se convertirá en el gerdamen de orden interno y de la proyección externa de la nación, por lo que en principio se carecerá de una tutela pública de la llamada cuestión social, por lo que permanecerá ajeno de una verdadera política de sanidad y educación pública, al no beneficiar directamente a los ciudadanos-propietarios, al tener garantizado la cubrición de sus propias necesidades sociales. De esta manera la defensa de un bien público defendida por el Estado como eje primordial de su política protectora queda diluida, primando la tutela de los intereses privados de los particulares.

#### **2.1.2. Los límites del derecho absoluto de la propiedad privada en el ordenamiento liberal. El principio del interés general como fundamento de la intervención del Estado en la esfera privada.**

Si el propietario gozaba de un papel absoluto sobre los bienes patrimoniales que aparecían incerto en su esfera privada, también fueron surgiendo en el propio seno del ordenamiento liberal, una serie de límites dominicales, que aunque escasos, que a la larga resquebrajarían la concepción absoluta del derecho de la propiedad privada. Rafael Colina resume en los siguientes términos los límites dominicales en relación con la absolutividad de la propiedad liberal: *La clásica dialéctica poder propietarios-limitaciones legales, siempre presente en el derecho de propiedad, se decanta en el orden liberal totalmente a favor del primero. El orden burgués relega los límites a un segundo plano, intentando reducir al mínimo su existencia, porque se entiende que constituyen una radical contravención a principios fundamentales del sistema, como la libertad y la plena autonomía privada. Lo natural y verdaderamente esencial es el poder del propietario, que ha de desarrollarse normalmente sin estar sujeto a ningún tipo de control. Por el contrario, las limitaciones han de ser consideradas como amputaciones infligidas a la noción pura de propiedad. Toda obligación que pese sobre el propietario es entendida como contraria a la naturaleza de su derecho, y en consecuencia, será vista como una interferencia ilícita en el poder absoluto que le corresponde. Consiguientemente, los límites dominicales se conciben a posteriori como algo tardío, accesorio, accidental y adventicio que únicamente ha de imponerse cuando sean totalmente imprescindibles y nesarios. En suma,*



*las limitaciones sólo se admiten como excepciones puntuales y aisladas a los principios generales que rigen en materia de propiedad. Desde esta perspectiva, se configura el derecho de propiedad como la posibilidad de obtener la totalidad de utilidades y ventajas que se deriven de una cosa, salvo excepciones. Por razón de esta excepcionalidad, los únicos límites dominicales que admite el orden liberal son aquellos que vienen impuestos directamente por una ley o por un reglamento (...) y si apenas se hace uso de la potestad legislativa y reglamentaria, necesariamente se concluye que, en el orden liberal, los límites a la propiedad privada son más bien escasos y proliferan poco*<sup>1333</sup>.

Sin embargo, la concepción absoluta del derecho privado llevó a resquebrajar incluso los propios intereses particulares, que habían los desentonantes de la propia construcción jurídica del Estado Liberal. En las tesis voluntaristas de Windscheid encontramos la esencia de un inicio del requesbrajamiento del carácter absoluto del derecho de la propiedad privada, *al considerar que si la propiedad privada se dejaba totalmente en manos de la voluntad de su titular, en cierto modo resultaba lógico que éste mirase únicamente a la satisfacción de sus necesidades, desentendiéndose totalmente del interés social de la comunidad, incluso cuando la realización de aquel comporte el menoscabo de éste (...)* Por lo tanto, se trataba de una concepción excesivamente individualista del derecho de la propiedad que, lejos de generar los beneficiosos resultados que en un principio se esperaban, no tardó en provocar graves problemas e inconvenientes. *Invistiendo al propietario de un poder casi omnímodo sobre los bienes, e invitándole a explotarlos a su voluntad sin mirar los intereses de sus semejantes y de la sociedad, se acabó por falsear el concepto mismo de propiedad. Este se transformó en un instrumento para satisfacción de necesidades y deseos demasiados personales, que incluso llegó a justificar caprichosas actitudes absentistas y parasitarias, que pronto se convirtieron en un rígido obstáculo*<sup>1334</sup>. En el propio ámbito económico, el carácter absoluto de la propiedad privada se convertiría en un verdadero obstáculo para los intereses de la propia burguesía, al ponerse en cuestión la propia tesis liberal del Laissez faire, que provocaría crisis periódicas que llevarían en algunos momentos una situación de caos financieros<sup>1335</sup>, al mismo tiempo que las transformaciones sociales, especialmente por las constantes olas de emigración del campo a la ciudad provocada por la industrialización.

Las nuevas circunstancias político-sociales llevaron a un marge de accion estatal, hasta ahora impensable en las doctrinas políticas del primer liberalismo, lo que nacería una nueva realidad institucional: El Estado

<sup>1333</sup> COLINA GAREA, Rafael, 1997, pp.95-96.

<sup>1334</sup> COLINA GAREA, Rafael, 1997, pp.104-105.

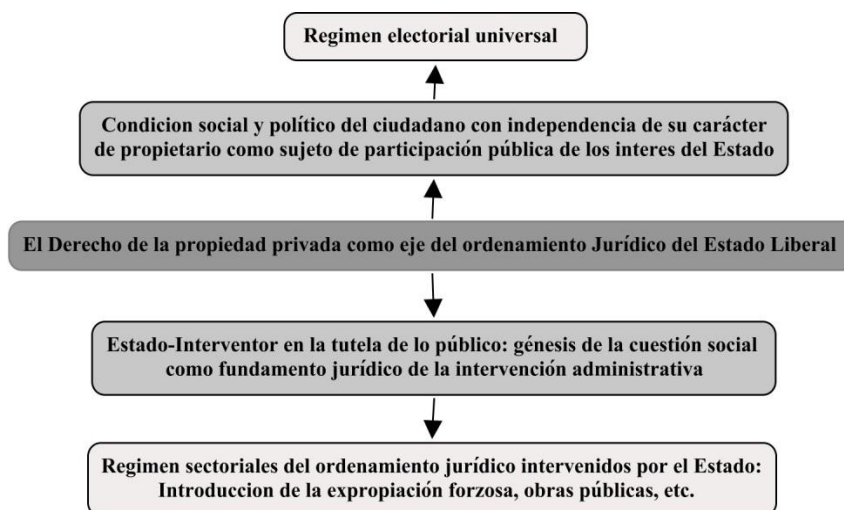
<sup>1335</sup> KEYNES, John Maynard, El fin del Laissez Faire en AA.VV. *Lecturas de Historia Económica*, Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1983.



Interventor. Al mismo tiempo que se va delimitando como principio informador del derecho a la propiedad privada, en el seno del Estado Liberal fue cuajando la idea conceptual de la existencia de un interés general, común a todos los individuos que formaban la comunidad, y que al igual que la propiedad privada, marcará la línea evolutiva que va a ir surgiendo en este amplio periodo. La concepción de un interés general va a estar subrayada por un interés colectivo, que supere al propio individualismo, e incluso anteponga la comunidad como sujeto social por encima del propio individuo, y que se irá proyectando en la propia concepción de la propiedad, que vivirá una nueva etapa de transformación vital en el seno de la evolución de la sociedad. Desde esta perspectiva, la propiedad va a dejar de ser un derecho absoluto para contemplarse como un derecho relativo. En este sentido, cabe subrayar la tesis de González García, al poner el énfasis en la concepción de una función social del derecho por el que el interés particular del titular estará subordinado al interés colectivo. Ya en el derecho romano se puede apreciar la posibilidad de admitir unas ciertas limitaciones sobre el inamovible derecho absoluto de la propiedad, al mismo tiempo que en el derecho medieval. Será ya en el propio proceso revolucionario cuando se induce la quiebra del derecho de la propiedad privada como propiedad absoluta, plasmada en el propio Comentario de la Glosa que al mismo tiempo que precisa la existencia de un derecho de la propiedad de disposición de las cosas copradorales, deja insertada una limitación, *salvo que la ley lo prohíba*, que al mismo tiempo se proyectaría en el propio Código Civil en su artículo 544 cuando a la hora de definir el derecho de la propiedad como derecho de gozar y disponer pone como limitación su *uso prohibido por la ley y por los reglamentos*. La irrupción de las concepciones marxistas y engelistas de la propiedad comunal-estatal, propias ya de las sociedades socialistas, comunistas o anarquistas, y la configuración de la llamada función social de la propiedad, propia ya de una concepción de crisis política del Estado Liberal, que no se contrapondrá bruscamente a la existencia del derecho de una propiedad privada, sino que se complementarán como pilares de un nuevo orden político que naciera en los últimos decenios del siglo XIX y principios del siglo XX. La idea de una función social de la propiedad irá unida al nuevo papel que va a adquirir el Estado, el llamado Estado Interventor, en función a garantizar los intereses de la comunidad, por lo que irá irrumpiendo si es preciso en la esfera privada de los individuos. La supuesta esfera pública nacida en el ámbito del Antiguo Régimen en función de los intereses de las clases privilegiadas van a ser sustituidas por un espacio público burgués, como lo delimitaría Habermas, por el que el Estado intervendrá limitadamente, se resquebrajará en los años finales del siglo XIX, por lo que se impondrá definitivamente la concepción de una función social del Estado. La concepción de utilidad pública en el seno del derecho de la propiedad privada irá cuajando paulatinamente en la proyección de algunos ámbitos de la vida social y política del Estado Liberal:

1º) El resquebrajamiento de la condición social de propietario para poder participar en la vida política de la nación. La idea de la condición social del ciudadano basado en su identidad de propietario, proyectada en su exclusiva participación política va a ir siendo superada en el ámbito de la representatividad pública de la segunda mitad del siglo XIX. Las nuevas regulaciones de las distintas legislaciones electorales que se van a ir produciendo en todos los países europeos van a ser un claro exponente del mismo, que culminará con la delimitación definitiva del sufragio universal.

2º) El Estado deja de ser un ente independiente de la sociedad, sino que por el contrario se va a definir como un verdadero agente delimitador de la actividad económica y social, teniendo un ejemplo esencial la institución jurídica de la expropiación forzosa por utilidad pública. Aunque no se puede insertar en el derecho romano su existencia, se cita tradicionalmente por la doctrina el caso de Teodorico cuando en el 526 ordenó talar árboles de particulares para construir una flota, aunque pagándose una indemnización. En la Edad Moderna se va instituyendo ya la expropiación por interés general, basada en una justa causa y mediando un *iustum praetium* que compensase al afectado, por lo que se preveía supuestos como la compensación de muros y fosas defensivas en la ciudad, la ordenación de las vías públicas o la construcción de castillos o fortalezas, al mismo tiempo que en el propio régimen de la propiedad agrícola.



La llegada del Estado Social y Democrático de Derecho va a suponer el triunfo de la Guillermo Orozco ha puntualizado como con la consagración del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho se ha ido modelando el concepto de la **FUNCION SOCIAL DEL DERECHO** en todos los ordenamientos jurídicos contemporáneos, caracterizado por el cambio del eje gravitacional de la titularidad al ejercicio del derecho, primando en este sentido

la actividad de este derecho en detrimento de la titularidad<sup>1336</sup>. El profesor Montes induce a plantear tres cuestiones: la primera cuestión es que la función social no la debe de cumplir cada titular, sino que la cumple y desarrolla la institución por sí misma. En segundo lugar, Moreno Trujillo encierra en estos términos la nueva concepción de la propiedad: *El ejercicio de la propiedad de cualquier bien, si está supeditado al cumplimiento, a la realización de un tipo social, si ha de revertir positivamente en el estado de la propiedad donde propietario y cosa se integran, ha de respetar, como mínimo, las condiciones básicas de la vida de tal comunidad. No puede, por tanto, atentar, dañar o deteriorar, ya sea por conductas positivas o por una dejación de los deberes que, en este sentido, se imponen al propietario titular de una cosa*<sup>1337</sup>. A lo que añade Guillermo Orozco: *la propiedad, perteneciente a su esfera patrimonial, más que a su esencia personal, se convierte así en instrumento de colaboración con el resto de la comunidad y, en ciertos casos, es casi como una propiedad compartida en cuanto puede hablarse de un patrimonio universal o de la comunidad en el que se integran, de forma mediata o inmediata, ciertos bienes de determinadas características por una decisión estatal en base a criterios del legislador, y aún sin un acto formal de adscripción, pues su contenido trasciende indudablemente al individuo que detente ese poder inmediato sobre la cosa*<sup>1338</sup>.

## 2.2. El papel del Estado como sujeto tutelar del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal en el ámbito de los derechos patrimoniales: Un ensayo frustrado de la construcción jurídica del Patrimonio Monumental como Bien de Dominio Público en el Estado Liberal.

	Derecho de la propiedad como fundamento jurídico del Ordenamiento	La propiedad monumental como fundamento jurídico del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico.
<b>Estado Liberal</b>	El derecho de la propiedad privada como principio informador del ordenamiento jurídico	El derecho de la propiedad privada como principio informador del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico.
<b>Estado Social y Democrático de Derechos</b>	La función social de la propiedad	El Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Cultural: La tutela pública va más allá del derecho de la propiedad privada

<sup>1336</sup> OROZCO, Guillermo, 1996, p.32.

<sup>1337</sup> MORENO TRUJILLO, *la protección jurídico-privada del medio ambiente y la responsabilidad por su deterioro*, Barcelona: Bosch, 1991, p.65.

<sup>1338</sup> OROZCO, Guillermo, 1996, p.34.

Durante el desarrollo del Estado Liberal asistimos a un intento de configuración del Patrimonio Monumental como bien de dominio público, o sea bienes de propiedad nacional, que va a ser frustrado por la amplia impronta que va a representar en el ordenamiento jurídico el derecho de la propiedad privada, por lo que hay que tener en cuenta como La titularidad dominical se convierte en la base reguladora de la tutela pública del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal. Al igual que los derechos patrimoniales fueron determinantes a la hora de diseñar el ordenamiento jurídico salido de los procesos revolucionarios liberales, el llamado régimen jurídico de la Propiedad Monumental se convierte en la base primordial de la tutela jurídica del legado patrimonial. La juridicialización del hecho cultural dependerá por tanto de quien sea el propietario del bien histórico-artístico que se quiera proteger, surgiendo una controversia inicial entre un hipotético derecho privado basado en el derecho irreductible de la propiedad privada por lo que dispondrá libremente de los derechos de gozo y disposición del bien, y un incipiente derecho público sobre unos bienes de interés público cuya selección será muy limitada, dependiendo si corresponde en sus caracteres al discurso axiológico que encierra el Valor Monumental, y se le haya delimitado una declaración formal por parte de la propia Administración. A medida que vaya insertándose la concepción de la función social de la propiedad, fundamentación jurídica del interés general de la propiedad, el Estado tutelaré con una mayor intensidad los bienes históricos-artísticos que aparezcan inmersos en la esfera privada del propietario, mediante las técnicas de la policía administrativa, por lo que se habrá ampliado el horizonte tutelar público del Patrimonio Monumental. Al mismo tiempo desde el mismo proceso revolucionario inicial del Estado Liberal, se irá produciendo una nacionalización de bienes históricos-artísticos, que habían pertenecido a la Iglesia y a la Monarquía, y en menor medida a las familias aristocráticas, que va a suponer la delimitación de unos bienes de dominio público, bajo la denominación genérica de Patrimonio Nacional, que serán ubicados en el ámbito de los Museos, Archivos y Bibliotecas, bajo la tutela pública del Estado.

Desde esta perspectiva se fue elaborando toda una doctrina jurídica especialmente en el ámbito italiano, como fue el caso de Veschi, por lo que se distinguiría unos bienes de titularidad pública y unos bienes de titularidad privada, tomando como base el concepto de derecho de propiedad plasmado en los Códigos Civiles liberales, por lo que consideraron que el régimen jurídico de los bienes históricos-artísticos básicamente consistiría en un conjunto de limitaciones administrativas, por lo que se llegaría a afirmar que el propietario o poseedor de estos bienes sería un ejerciente privado de funciones públicas<sup>1339</sup>. De ahí que Cantucci señalará que el régimen administrativo de la

<sup>1339</sup> VESCHI, E. *La circolazione dei beni culturali degli enti territoriali*, Tesis inédita, citado en CARRANCHO HERRERO, M<sup>a</sup> Teresa, p.48.

propiedad para la tutela del Patrimonio Histórico-Artístico, se caracterizaría por un conjunto de limitaciones que impondrá al propietario una serie de obligaciones de hacer o de no hacer o de subordinar el ejercicio de la facultad de disposición<sup>1340</sup>. En la doctrina española, cabe señalar como Garrido Falla defiende la misma tesis, y el propio Martín Mateo, que hablaba de propiedad vinculada, en concreto del vínculo monumental, sometido a determinadas restricciones de índole negativo, o imponiendo a los propietarios verdaderas cargas positivas, e incluso Álvarez Álvarez lo define como un supuesto especial de demanio, adscrito al dominio público.

Esta lectura patrimonialista de la tutela del Estado se encuentra actualmente superada en la doctrina contemporánea, especialmente en el ámbito italiano en las tesis planteadas por Giannini, en la que en palabras de Alonso Ibañez, *no supone tan solo un intento más por sistematizar teóricamente esta materia sino que deja teóricamente aclarado el porqué la naturaleza jurídica de los bienes del Patrimonio no tiene que hacer del derecho de propiedad la piedra angular*. En las teorías de Gianni va a existir una clara evolución conceptual a la hora de abordar al bien cultural, ya que en 1963 en un artículo titulado defendería que las cose d'arti era una clara manifestación de propiedad dividida, por la que posteriormente en 1976 ratificaría dicha tesis. El núcleo de esta teoría está en que una cosa puede ser elemento material de varios bienes jurídicos, por lo que el bien cultural es elemento material de intereses: de naturaleza patrimonial, que generan o posibilitan su pertenencia a un sujeto, lo que implica derecho de disposición, goce, obligaciones, como tal, este objeto es un bien patrimonial y de naturaleza inmaterial, el valor cultural, que genera una potestad del Estado tendente a su conservación y fruición, por lo que el objeto es un bien jurídico cultural. De esta manera en el bien cultural existirían dos realidades diferenciadas, su dimensión patrimonial y su dimensión cultural, siendo ésta el núcleo efectivo de la teoría de los bienes culturales, por lo que su función social no se ve alterada por el régimen público o privado en que este inmerso. Aunque no considera el régimen de la propiedad como determinante para considerar la naturaleza jurídica del bien cultural, Giannini apuntará una propiedad pública demanial cuando se trate de bienes de titularidad pública, mientras que aquellos bienes de titularidad privada se regirá por el régimen de propiedad dividida, con la coexistencia de dos derechos dominicales, el de derecho privado en cuanto propietario de un bien patrimonial y el del Estado en cuanto garante de la función del bien cultural<sup>1341</sup>. En la misma línea encontraríamos las teorías de

---

<sup>1340</sup> CANTUCCI, *Le cose d'interesse artistico e storico in giurisprudenza e dottrina*, Napoles, 1968.

<sup>1341</sup> Por la importancia que se refiere al tema en cuestión recogo algunos fragmentos de la doctrina de Gianni en la que se aprecia ya la superación del concepto patrimonialista de la tutela jurídica del Patrimonio Monumental: *Hay quien la ha elaborado como una categoría propia de bienes privados sujetos a un especial régimen público; quien la ha elaborado como una forma en sí misma de la propiedad privada que tiene función social (...) El bien cultural*

Grisolia, que delimita por primera vez una construcción sistemática de criterio unitario para los bienes públicos y privados del Legado Patrimonial, al prevalecer el fin público sobre la pertenencia de estos bienes<sup>1342</sup>. Sandulli distinguiría desde la teoría general de los bienes de interés público, entre bienes públicos, que reuniría la doble característica de pertenencia a un ente público y capacidad de realizar directamente un interés público, y los bienes de interés público que aun estando sometido a un régimen de propiedad privada, comparte con aquellos el llamado interés público<sup>1343</sup>. El bien cultural, es público en cuanto bien de fruición no en cuanto bien de pertenencia, que en la doctrina española serían recogida por García de Enterría o Concepción BarreroRodríguez. La controversia entre la posible demanialización de los bienes y el respeto del derecho de la propiedad va a ser el eje constructor de todo el sistema normativo que se irá articulando, teniendo como resultado del mismo una opción intermedia, como sería a la función social que estos bienes van a ir adquiriendo que le va ser objeto de intervención del Estado, imponiendo a sus propietarios unas medidas interventoras.

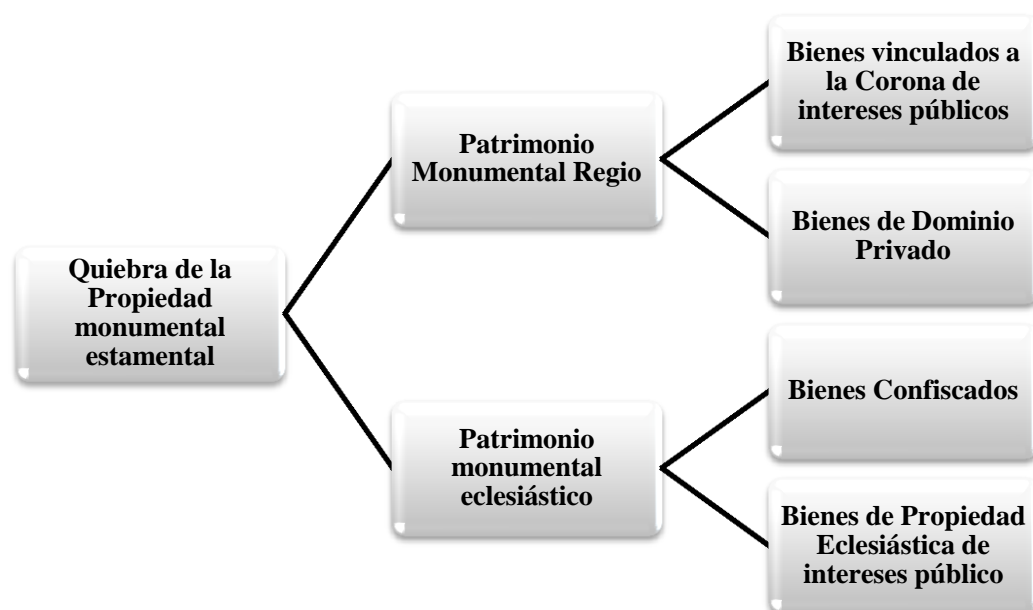
---

*es público no en cuanto bien de pertenencia, sino en cuanto bien de fruición. Para comenzar a aclarar dicha afirmación: cuando se dice que el bien cultural pertenece al patrimonio cultural de la nación, o bien, ampliando el ámbito más exactamente, al patrimonio cultural de la humanidad, se usan expresiones prejurídicas, aunque no sean precisamente enfáticas, que jurídicamente no tienen otro significado que no sea que el bien cultural es bien cultural: ser testimonio material de los valores de la civilización significa, de hecho, ser parte de este patrimonio (cultural) compuesto por las expresiones en que cada civilización, y por tanto la civilización en su conjunto, se manifiestan(...) Lo único que aquí pertenencia se usa en el sentido de formar parte, no en el sentido de pertenecer. En cambio, en cuanto a la pertenencia, como pertenecer, el bien cultural parece que no tiene un propietario en sentido propio(...) Cuando decimos que el bien cultural es un bien de fruición más que de pertenencia, queremos referirnos(...) a que el Estado-Administración de los bienes culturales no tiene el goce de la cosa, porque el goce de la cosa lo tiene el universo de los que disfrutan del propio bien, es decir, un grupo desagregado e informal de personas físicas, indeterminadas e indeterminables como universo, pero que se pueden concretar en el presente en elementos o en grupos agregados particulares que constituyen este universo(...) La Administración tiene, por tanto, un interés en la integridad del bien, sin que se pueda decir, aparentemente, que se tenga el goce; además, el interés es a la integridad física y no a la integridad patrimonial, que, al máximo, concierne los bienes sobre los que la Administración tiene la pertenencia económica. Por otra parte, carece del típico interés del propietario en la utilización del bien, ya que el bien, como bien cultural, no tiene otra función que la fruición universal(...) Por otro lado, hay que descartar la hipótesis de que el bien cultural pueda ser entendido como un bien colectivo administrado por el Estado por cuenta de la colectividad, porque la propiedad colectiva es siempre propiedad de un bien patrimonial(...).*

<sup>1342</sup> GRISOLIA, M. Arte, Enciclopedia del Diritto, Vol.III, p.96 y ss.

<sup>1343</sup> SANDULLI, A.M. Beni pubblici, en Enciclopedia del Diritto, V, Milán, 1959, pp.277-279.





### **2.2.1. La configuración del sistema normativo en el Estado Liberal: La primacía del derecho privado sobre el derecho público en la configuración del sistema normativo del Patrimonio Monumental.**

En los últimos años el Patrimonio Histórico-Artístico ha sido objeto de atención por parte de la Administración, intensificándose tanto las actuaciones de intervención en aras a la conservación de los bienes que la comprenden, evitando la degradación de los mismos, como al mismo tiempo evitando su pérdida en manos privadas fruto de un mercado fraudulento, es lo que se conoce con la terminología de la protección monumental, tutelada por el Estado. No cabe duda el papel desempeñado en la actualidad por el ámbito privado, cuya aportación en la protección monumental actualmente es indiscutible. Ignacio Henares Cuellar apunta como *la tutela se desarrolla dentro de unos complejos parámetros epistemológicos, ideológicos, políticos, culturales y técnicos. Todos ellos conforman una realidad en que cada uno es imprescindible y la contribución al éxito de la conservación de tan diversos medios un compuesto de actos, continuos o simultáneos, igualmente insuperables*<sup>1344</sup>. La sociología del arte ha introducido amplios matices referentes a los comportamientos sociales del uso que se le da a un Patrimonio Histórico-Artístico. El uso social del Patrimonio Cultural no va a ser exclusivo de la esfera privada del coleccionismo, sino que a medida que se vaya consolidando la constitución del Estado moderno se va a convertir en uno de los sujetos vitales en la concienciación patrimonial. Los intereses culturales del Estado, al igual que en el caso del coleccionismo individualista van a ser

---

<sup>1344</sup> HENARES CUELLAR, Ignacio Conocimiento histórico y tutela en *Historia del Arte y Bienes Culturales*, Cuadernos, Instituto Andaluz del Patrimonio, 1998, p.10.

múltiples, desde factores políticos (una serie de bienes van a ser conservados para dar fundamento ideológico a un sistema de poder determinado), sociales (el prestigio que conlleva proteger los bienes que son vitales para una colectividad o la propia cohesión social) o incluso económicos (Los bienes conservados pueden ser un factor de riqueza, concretamente en el ámbito turístico). Se va perfilando por consiguiente el modelo de Estado Tutelar del Patrimonio, mediante una política de selección y valoración de aquellos bienes que considera que son fundamentales en el ámbito de la sociedad, con una política cultural determinante para los individuos que configuran una sociedad. En muchas ocasiones la intervención administrativa del Estado será determinante para los intereses generales, en otras solamente se comportará como un sujeto individualista ajeno al interés colectivo.

Con la delimitación de la protección monumental, el Arte y el Derecho se entrecruzan, convirtiéndose los bienes históricos-artísticos en objetos de Derecho<sup>1345</sup>. Sin embargo, ambas disciplinas no siempre tendrán una relación pacífica, que incluso para algunos sectores de opinión puede llegarse a juzgar como algo aberrante la intervención del Arte en el ámbito del Derecho, llegándose a defender la máxima *El Derecho no entiende de Arte*. Sin embargo, el Arte debe de ser invadido en su ámbito de protección y conservación por el Derecho, surgiendo la idea del llamado Estado Tutelar en el ámbito del derecho contemporáneo de los bienes históricos-artísticos. Al igual que había ocurrido en el Antiguo Régimen, el proceso revolucionario liberal conllevó la elaboración de un modelo de Estado-Tutelar de la Cultura como vehículo instrumentalizador de la ideología imperante del momento, bien como exaltación de los valores del absolutismo monárquico o como legitimadora de los principios liberales de la clase burguesa. Jaume Bernarde señala la configuración de los conceptos de bienes nacionales y patrimonio nacional que se van a ir articulando en el seno del Estado en su ansia de acaparar el protagonismo en el ámbito cultural: *La ideología de apropiación individual y colectiva de los bienes patrimoniales es esencial para permitir a la política del patrimonio crear la noción de bienes nacionales y de patrimonio nacional; y con estos nuevos conceptos inculcar o potenciar en la población la idea de un pasado nacional, un presente nacional y un, aunque imprevisible, futuro nacional. La responsabilización y gestión por parte del Gobierno o del Estado de este patrimonio nacional es como un tranquilizante para nuestra*

<sup>1345</sup> Javier García Fernández surgiere como *En contra de lo que pudiera pensarse, el hombre se ha enfrentado a los fenómenos artísticos, sea coetáneos o tengan una mayor relevancia histórica, con fines mucho más amplios que los meramente estéticos. Ciertamente que no se concibe la aproximación de una obra de arte sin una dimensión fundamentalmente estética y subjetiva, pero también es verdad que la fruición personalísima que los hombres obtienen de cualquier manifestación artística tiene un trasfondo social muy intenso que obliga a no desligar ambos niveles si se quiere llegar a una comprensión plena de los fenómenos estéticos, pues a fin de cuentas, el arte es en sí misma una realidad social. Los poderes públicos, en todos los tiempos, se han preocupado del arte, y a través de esta preocupación todas las expresiones y manifestaciones artísticas entran en el campo del Derecho*, p.183.

*supervivencia futura a través del patrimonio (...). Una ideología de este tipo podría explicar, en parte, el culto actual para con el patrimonio, pero sobretodo otorga al poder público una potestad y una cierta libertad de definir y decidir lo que debe durar y lo que no, lo que debe conservarse y lo que puede destruirse o ignorarse. Es decir, una autoridad y un poder sobre el sistema de conservación. Esta sería una de las modalidades de lo que podríamos llamar “la conservación selectiva”<sup>1346</sup>.*

Desde el seno del Estado Liberal va a ir surgiendo la idea de la existencia de un Legado Patrimonial como bien jurídico tutelado por los poderes públicos aunque limitando aquellos que cumplan una funcionalidad primordial de exaltación de los valores de la nación burguesa nacida del proceso revolucionario, el llamado Valor Monumental, que no es apreciado en todos los bienes del Legado Patrimonial, sino solamente en aquellos que reúna una serie de caracteres que cumplan con los intereses particulares de la burguesía reflejado en la identidad de la nueva nación. La ambigüedad del concepto jurídico que se quiere proteger se convertirá en un primer límite en la acción pública de protección y conservación frente a los intereses de los particulares. Desde esta perspectiva el Estado se va a comportar más que como la instancia suprema de promotor de la cultura identificado con los intereses de los ciudadanos, como un propietario privado que va asumiendo cada vez más potestad de intervención sobre los demás particulares con una clara intención ideológica. Las transformaciones jurídicas que se van a producir en el derecho de la propiedad en el seno del Estado Liberal a raíz de los procesos revolucionarios no van a dejar ajeno a la hora de emerger el Patrimonio Monumental como bien de interés jurídico, al igual que va a ocurrir en otros sectores del ordenamiento, por lo que la tutela jurídica de los bienes históricos-artísticos quedarán a expensa de su régimen de propiedad, la llamada Propiedad Monumental. Y es que fue sin duda alguna el gran número de expolios indiscriminados causado por el coleccionismo privado la que desencadenó la acción tutelar del Estado. Durante este largo periodo se va a ir produciendo una pérdida considerable de amplias colecciones de obras de arte a través de un mercado ilegítimo que en un principio la administración no va a tener posibilidad de paliar. Una red de tráfico ilegal se irá extendiendo por amplios sectores europeos en el momento en que los bienes históricos-artísticos vayan adquiriendo un valor económico en el mercado. A medida que el Estado se conciente de la importancia cultural de estos bienes irá reaccionando, aunque muy lentamente, y no en todos los bienes que actualmente consideramos digno de ser protegidos. La concienciación pública surgida en el Estado Liberal no cabe duda que abrió un nuevo camino en la historia de la

---

<sup>1346</sup> BERNARDES I POSTILS, Jaume La conservación preventiva: ¿Qué, cómo y por qué? HIDALGO CUÑARRO, José Manuel *La conservación preventiva de bienes culturales*. Coloquio Internacional La conservación preventiva de bienes culturales. Vigo, 1996. Diputación Provincial de Pontevedra, p.67.

conservación del Patrimonio Histórico-Artístico especialmente con la configuración del Bien Histórico-Artístico como Bien de interés general, por lo que se fue delimitando un marco jurídico de protección<sup>1347</sup>. Sin embargo, la inercia administrativa, la falta de medidas ejecutorias, las circunstancias políticas o incluso la potestad del ámbito privado en muchas ocasiones limitaron la acción tutelar del Estado.

La intervención estatal como sujeto activo en la tutela jurídica del Patrimonio Monumental va a variar en función de las distintas filosofías que inspira las actuaciones en unos y otros países del ámbito europeo y occidental, y, por tanto, su marco normativo y jurídico en general. Así, es necesario tener en cuenta las diferencias existentes entre el ordenamiento jurídico de los países basados en el sistema del common law y el de aquellos que tiene como base el derecho romano y el código napoleónico. Esta diferencia suele también coincidir, en gran medida, con una filosofía de base protestante en los primeros. Para éstos, la función de los poderes públicos es muy limitada, y el ordenamiento jurídico está basado en la cauística, y no en un entramado muy

<sup>1347</sup>José Castillo Ruiz resumía en su ponencia presentada en el Seminario Fons Mellaria de 1997 la concepción del Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Público, del que he extraído algunos fragmentos: *Si bien durante el siglo XVIII y el siglo XIX, existe ya una cultura proteccionista bien consolidada y definida, no será hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se defina y caracterice lo que hoy entendemos por tutela del Patrimonio Histórico y que podríamos definir como un proceso unitario y homogéneo de acción en los bienes históricos que va desde la elaboración e identificación de los objetos susceptibles de protección hasta su puesta en funcionamiento en la sociedad. Este proceso, perfectamente constatable si atendemos a la existencia de una precisa y consistente caracterización de los bienes a proteger, especialmente a través de los valores históricos y artísticos, de una regulación jurídica y estructura administrativa avanzadas y de unos modelos de intervención experimentados y consensuados, tiene como elemento fundamentador y propiciador la consideración de los objetos a proteger como bienes de interés público. Son muchas las consecuencias que se deriva este hecho. La primera de estas consecuencias es que el Estado se convierte en el principal garante y responsable de la protección, ya que a él compete la salvaguardia del interés público o social, quedando legitimado para imponer medidas coercitivas a los bienes de titularidad privada. Lógicamente esto es posible gracias a la liquidación progresiva del Estado Liberal y la instauración, aun no definitiva, del Estado Social de Derechos. Otra trascendente consecuencia es el hecho de que el epicentro de la protección se traslada del objeto al sujeto, ya que no van a ser los valores objetivos e inherentes de un determinado bien los que van a determinar en su totalidad las medidas de protección sobre los mismos sino que lo van a ser las exigencias que los ciudadanos reclaman a dichos bienes según los valores y contenidos que éstos les transmiten. Conclusión importante será, entonces, la conversión de la tutela en un hecho histórico cambiante y modificable en función del propio devenir del hombre y de sus necesidades vitales. Consecuencia, también, del interés público que recae sobre los bienes de naturaleza histórica es la importante ampliación que se produce en la masa patrimonial. Y ello en varias dimensiones: cuantitativa (la inclusión de todos los periodos históricos y de todo tipo de objetos –los bienes muebles especialmente– como susceptibles de protección amplía enormemente el contingente patrimonial), cualitativa (los valores histórico y artístico se completan con el etnográfico, el documental, el paisajístico, etc) (...).*

desarrollado de normas; ello da lugar a que la iniciativa privada tenga un papel preponderante; la sociedad se organiza fundamentalmente a través de ésta, y el individuo se siente comprometido a colaborar en la realización de diversas tareas sociales que incumben al bien común de la colectividad. Por el contrario, en los países con tradición de derecho romano y código napoleónico, el ordenamiento jurídico está sumamente desarrollado y el ciudadano confía en el paternalismo del Estado, ya que el marco jurídico atribuye las competencias y funciones necesarias para velar por el interés público a la Administración. Esta dicotomía ha dado lugar, históricamente, a una mayor proliferación de asociaciones, fundaciones y otro tipo de entidades benéficas, de carácter privado, en los países de raíz protestante, mientras que en los otros países este tipo de organizaciones solía vincularse a la Iglesia y a las Ordenes Mendicantes. Dentro de los países anglosajones, en los cuales la Administración Pública prácticamente carece de competencias en materia de Patrimonio, es también preciso hacer distinciones, pues mientras en Inglaterra, por ejemplo, existe un National Trust realmente operativo en este terreno, en Estados Unidos, la iniciativa privada y la labor de las comunidades locales apenas alcanza a cubrir las necesidades con sus iniciativas dispersas y voluntaristas. Tengamos en cuenta que la desprotección legal y el respeto casi absoluto a la propiedad privada, permite en dicho país que un particular pueda llegar a derribar un monumento clasificado de su propiedad<sup>1348</sup>.

Sería la tradición romanista la que se impondría en principio a la hora de elaborar una regulación protectora del Patrimonio Monumental, por lo que será el derecho de la propiedad la que justifique el goce y disfrute del bien, por lo que se irá moldeando un conflicto jurídico entre los derechos de la propiedad privada y el interés público en función del régimen de propiedad del Bien Histórico-Artístico, convirtiéndose en la verdadera esencia de su naturaleza jurídica. En realidad subyacía el conflicto surgido entre Derecho Público y Derecho Privado en este periodo inicial del liberalismo. La ya clásica distinción entre Derecho Público y Derecho Privado surge como en muchas ocasiones se ha comentado en el texto del Corpus Iuris de las Instituciones y el Digesto en el ámbito del Derecho Romano<sup>1349</sup>. Kant diferenciaría ya en el siglo XVIII las esferas del estado y de la sociedad; lo que impusiera por el Estado correspondería al derecho público y los vínculos creados por los individuos, correspondería a la esfera jurídica de lo privado. Bobbio distingue el Derecho

---

<sup>1348</sup> SUAREZ-INCLAN DUCASSI, María Rosa El uso sensato del patrimonio a la luz de su evolución histórica y conceptual en *Tratado de Rehabilitación. Tomo 2. Metodología de la restauración y de la rehabilitación*. Universidad Politécnica de Madrid, 1999, p.273,

<sup>1349</sup> A modo de recuerdo insertamos la fórmula de Ulpiano en la distinción entre lo privado y lo público en la Teoría General del Derecho: Dos son las posiciones en este estudio: el público y el privado. Es derecho público el que respecta al estado de la República; privado el que respecta a la utilidad de los particulares, pues hay cosa de utilidad pública y otras de utilidad privada. Ulpiano, inst. D. 1.1.1.2.

Público y el Derecho Privado como dos esferas irrenunciables<sup>1350</sup>. El Derecho Privado va a ser uno de los ejes del nuevo orden jurídico del Estado Liberal nacido frente a la legislación constitucional nacida de los procesos revolucionarios. Apunta Hesse que *el Derecho Privado aparece más bien como el auténtico baluarte de la libertad burguesa, junto al cual el Derecho Constitucional tenía una importancia secundaria. Le correspondía incluso una primacía material frente al Derecho Constitucional. Como sistema de las esferas y los límites de la libertad asumió parcialmente el papel de los derechos fundamentales, que (...) sólo con reservas podían desempeñar. En todo caso, esa libertad burguesa era una libertad no política, una libertad de los particulares para disponer de un espacio propio sin intromisiones del Estado (...) El carácter liberal del Derecho Privado no era así el fundamento de una comunidad libre, sino elemento de una simbiosis, que caracteriza todo el periodo histórico, entre Estado Constitucional y Sociedad regida por el Derecho Privado*<sup>1351</sup>. Esta controversia entre el Derecho Privado y Derecho Constitucional de la primera fase del liberalismo decimonónico no permaneció ajena al desarrollo del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico durante el Estado Liberal. Se puede perfilar en gran parte del ordenamiento de este momento una primacía de los intereses privados a la hora de disponer de los bienes históricos y artísticos en contraposición a los intereses generales representados por el Estado, por lo que se convierte en un límite irreversible en el camino de configurar un verdadero Derecho Público del Patrimonio Histórico-Artístico.

Con la crisis del Estado Liberal se produce una clara ruptura de la relación derecho privado y derecho público, por lo que se produce un cambio significativo en el ámbito tutelar del Patrimonio Monumental, surgiendo los indicios de una concepción pública en términos contemporáneos, teniendo que resaltar dos factores determinantes: 1º) La función social de la propiedad en el ordenamiento del Estado Liberal que transformará todo el contenido jurídico del derecho de la propiedad privada como derecho inviolable y la intervención de la propia Administración Pública en la propia esfera individual. La

<sup>1350</sup> BOBBIO, Norberto *Estado, Gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política*. Breviarios. Fondo de Cultura Económica, 487, México, 3ª edición, 1994, pp.11 y ss. Muy aceptada por la crítica es la ya clásica definición de Messineo que señala *como el derecho público es el que regula la organización de la sociedad y la actividad del Estado y de los demás agregados políticos menores, así como las relaciones de éstos entre sí y las relaciones de estas entidades y los individuos (...), Derecho Privado es el que regula los intereses particulares y las relaciones entre los sujetos que en ellos participan; sujetos que se encuentran entre sí, de ordinario, en posición de igualdad (...)*. La definición de Messineo está recogida en la obra de Ricardo de Angel Yagüez *Una teoría del derecho. Introducción al estudio del derecho*. Civitas, 1993, p.124. Cabe mencionar que actualmente se precisa por algún sector de la doctrina la existencia de una tercera vía de derechos, el llamado Derecho Social, que ya es propio del Estado Social y Democrático de Derechos, quedando fuera de este estudio (Yagüez, A., 1993, p.125).

<sup>1351</sup> HESSE, Konrad, *Derecho Constitucional y derecho privado*. Cuaderno Civitas, Madrid, 1995, pp.38-39.



consideración de un derecho subjetivo de la propiedad privada de los bienes históricos-artísticos será sustituida por la idea de la utilidad pública del Monumento Histórico-Artístico; 2º) El Estado irá delimitando el papel que le corresponderá a la hora de conservar y recuperar aquellos bienes históricos-artísticos que considere digno de salvaguardar. La clave de la construcción de un verdadero Derecho Público del Patrimonio Histórico-Artístico estará sustentada en la capacidad de actuación del poder estatal en la esfera privada de los individuos o asociaciones que posean bienes digno de ser protegidos por el propio Estado<sup>1352</sup>. Uno de los aspectos más significativos que debemos resaltar en la crisis del sistema liberal en el ámbito tutelar del Patrimonio Cultural es su inserción como objeto de las normas constitucionales. En la doctrina italiana se hace referencia en el ámbito del derecho constitucional a un conjunto de derechos de naturaleza socio-cultural, identificados bajo el término de Constitución Cultural, propia ya de un Estado Social y Democrático de Derechos, por lo que las Normas Fundamentales promoverán no solamente el deber de conservar y proteger el Patrimonio Histórico-Artístico, sino al mismo tiempo. La impronta del Derecho Privado sobre el Derecho Constitucional o Derecho Público del Estado se resquebrajará con la nueva concepción que ya en la segunda mitad del siglo XIX se va a ir produciendo en la propia estructura del Estado, la llamada constitución estatal, como quedaría reflejada en la obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) quien ya en su primera obra *La constitución de Alemania*, lamentaba que los alemanes consideraban constitución lo que era el resultado de una serie de contratos, de pactos, que en el fondo se trataba de un *catastro de los derechos constitucionales más diversos, adquiridos a manera de derecho privado*.

---

<sup>1352</sup>En el Derecho del Patrimonio Cultural contemporáneo la concepción pública, independientemente cual sea su propietario, del bien a proteger se convierte en la verdadera esencia de la protección, como se plasma en la síntesis del Juan Manuel Alegre Ávila: *El conjunto o serie de limitaciones y restricciones que definen el régimen de la propiedad histórica ha encontrado eco en la doctrina, que ha esbozado distintas explicaciones acerca de la conjunción entre la caracterización del derecho de la propiedad, en cuanto genérico derecho de goce y disposición, y esas limitaciones a que se veía constreñido el propietario (titular de derechos reales o poseedor en general) de un bien histórico (...) En un primer momento se acudió a la doctrina de las limitaciones administrativas de la propiedad privada, doctrina que veía en el conjunto de deberes y limitaciones impuestos a los propietarios unas a modo de restricciones o constricciones del ordinario régimen de uso y disposición, justificadas por razones de interés público y que, en todo caso, dejaban a salvo la esencia del derecho de la propiedad como poder de libre utilización y disposición de los bienes sobre los que recaía (...) Y así (...) se dirá que el propietario privado era una especie de ejerciente privado de funciones públicas, o bien, un custodio de interés público, resaltándose de ese modo, cada vez con más intensidad, la dimensión de función o interés público que cumplen estos bienes, más allá de la estricta perspectiva subjetiva del titular privado de derechos.* ALEGRE AVILA, Juan Manuel *El Estatuto jurídico de la propiedad histórica*. DE DIOS, Salustiano; INFANTE, Javier, ROBLEDO, Javier, TORIJANO, Eugenia (Coords.) *Historia de la propiedad. Patrimonio Cultural*, Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, Madrid, 2003, pp.453-454.

Mientras que permaneciese en este proceso, Alemania estaba condenada a un proceso de decadencia política, ya que no podía definir como una sola unidad la nación a través de la autoridad de un Estado<sup>1353</sup>. De esta manera como apunta Maurizio Fiovaratti *La constitución estatal sería la norma de derecho público que estaba llamado a imponerse sobre la tradicional estructura privada de la constitución estamental y feudal (...). Está pensada con la finalidad de combatir todo tipo de privatismo, y en particular el que deriva de una concepción general de la constitución que ve en ella una pura norma de garantía de las propiedades y de los derechos de la constitución*<sup>1354</sup>.

No se puede hablar en este momento de la existencia de un constitucionalismo cultural. Recogemos las palabras de Carlos Ruíz Miguel en relación al constitucionalismo cultural en el ámbito del Estado Liberal: *Un análisis superficial podría llevarnos a una conclusión sorprendente, esto es, que no hay una constitución cultural por la sencilla razón de que la Cultura está completamente ausente de las constituciones de la época liberal. Podría incluso decirse que en este momento existe un Estado de Cultura entendido como de libertad estatal para la cultura. Partiendo de que una Constitución es un código escrito que contiene los principios fundamentales de una comunidad, el hecho de que en el mismo no se recojan expresamente menciones a la Cultura puede dar lugar a dos interpretaciones opuestas. En primer lugar, que precisamente el carácter espiritualmente homogéneo de las sociedades que se dan esas constituciones y el consiguiente carácter indiscutido de los principios que vertebran su cultura, hacen innecesaria proclamar con la solemnidad y garantías propias de una Constitución lo que es comúnmente estimado como obvio. De esta suerte, la ausencia expresa en la Constitución de la Cultura, en realidad traduce una presencia presupuesta e indiscutida de esa misma Cultura. Pero, en segundo lugar, cabía entender que, precisamente porque la homogeneidad de la sociedad que se dota de Constitución es solo ficticia, las Constituciones sí que positivizan una determinada cultura, pero lo hacen implícitamente. De esta forma, sería precisamente en el conjunto del diseño político del Estado donde se encontraría plasmada una determinada Cultura, con exclusión precisamente de otras (...). Tanto una como otra interpretación permitirían explicar por qué la ausencia constitucional de la Cultura no es ausencia legal como se comprueba en el hecho de que en el ámbito menos político de la legalidad ordinaria, sí que se encuentran diversas normas relacionadas con el ámbito de la cultura*<sup>1355</sup>. Podemos encontrar varias causas a la hora de perfilar la no inclusión del hecho cultural en el constitucionalismo liberal, y por

<sup>1353</sup> HEGEL, F., *La constitución de Alemania*, ed. de Dalmacio Negro Pavón, Madrid, 1972.

<sup>1354</sup> FIORAVANTI, Maurizio, *Constitución. De la Antigüedad a nuestros días*, Editorial Trotta, Madrid, 2001, pp.136-137. Las teorías del Estado están perfectamente expresada en la obra de Hegel *Fundamentos de filosofía del derecho* (1821) y en Georg Jellinek (1851-1911), quien en su *Teoría general del Estado* definiría que *la Constitución del Estado comprende los principios jurídicos que determinan cuales son los órganos supremos del Estado, el modo de su formación, sus relaciones recíprocas y su esfera de acción, y en fin la posición fundamental del particular respecto al poder del Estado*. JELLINEK, G. *Teoría general del Estado*, Granada, 2000, p.506.

<sup>1355</sup> RUIZ MIGUEL, Carlos *El Constitucionalismo cultural*, en *Patrimonio Cultural y Derecho*, 5, Madrid, 2001, pp.148-149.

consiguiente, la defensa constitucional del Patrimonio Cultural. Una cuestión inicial lo encontraríamos en la propia naturaleza del constitucionalismo liberal, al no incluir el derecho cultural en el ámbito de los derechos individuales que el Estado Liberal va a reconocer. No existe aún la concepción dogmática de los llamados derechos de la tercera generación, en la que se incluyen actualmente la cultura y los bienes culturales. Pero sin duda la cuestión primordial de la no inclusión en el constitucionalismo liberal del hecho cultural radicaría como señala G. Rolla en que tenía que existir un cambio radical del derecho de la propiedad privada en su carácter absoluto que hasta la crisis de principios del siglo XX no se daría, al concebirse al mismo tiempo la Constitución como un conjunto de derechos de los particulares que limitara la intervención de la Administración<sup>1356</sup>. Y es que la construcción jurídica del Legado Monumental como derecho social no supuso su inserción en las normativas constitucionalistas liberales, sino que su regulación fue definida en base al respeto de los derechos patrimoniales de interés privado que se convirtieron en el alfa y omega del sistema normativo liberal.

A pesar de que siempre se ha reconocido una tardía incorporación de los derechos propios del Patrimonio Cultural en el constitucionalismo europeo, ya en el ámbito del Estado Liberal podemos advertir algunos casos aislados como ya apunta el profesor Benito de Castro, al sugerir cómo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano incluida en el proyecto de Constitución Republicana francesa de 24 de junio de 1793, en su artículo 22 ya se perfila el derecho a la instrucción pública, abriendo así el camino a la inclusión del reconocimiento constitucional al hecho cultural<sup>1357</sup>. Las Constituciones Suizas de 1884 y la Alemana y Austriaca de 1919 y 1920 serían los precedentes del constitucionalismo liberal a la hora de regular la protección del hecho cultural<sup>1358</sup>. La defensa constitucional del Patrimonio Histórico-Artístico llegaría ya en la segunda mitad del siglo XX, como en las constituciones de 1947, griega de 1975 y portuguesa de 1976. Podemos encontrar varias causas a la hora de perfilar la no inclusión del hecho cultural en el constitucionalismo liberal, y por consiguiente, la defensa constitucional del Patrimonio Cultural. Una cuestión inicial lo encontraríamos en la propia naturaleza del constitucionalismo liberal, al no incluir el derecho cultural en el ámbito de los derechos individuales que el Estado Liberal va a reconocer. No

---

<sup>1356</sup> ROLLA, G. Bienes Culturales y Constitución, en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, núm. 2, 1989, p.167.

<sup>1357</sup> BENITO DE CASTRO, Cultura, Culturas

<sup>1358</sup> PRIETO DE PEDRO, J. Concepto y otros aspectos del patrimonio cultural en la Constitución Española. Homenaje a García de Enterría, Tomo II, Civitas, 1991, p.1551. El artículo 150 de la Constitución de Weimar contenía una innovadora normativa sobre el Patrimonio Monumental: *Los monumentos del Arte, la Historia y la Naturaleza gozan de la protección y de la asistencia del Estado. Al Reich corresponde impedir la emigración al Extranjero del patrimonio histórico alemán*. Por su parte, el artículo 10.13 de la constitución de Austria atribuía al Estado Federal la competencia legislativa y de ejecución sobre archivos, bibliotecas, colecciones y protección de monumentos.

existe aún la concepción dogmática de los llamados derechos de la tercera generación, en la que se incluyen actualmente la cultura y los bienes culturales. Pero sin duda la cuestión primordial de la no inclusión en el constitucionalismo liberal del hecho cultural radicaría como señala G. Rolla en que tenía que existir un cambio radical del derecho de la propiedad privada en su carácter absoluto que hasta la crisis de principios del siglo XX no se daría, al concebirse al mismo tiempo la Constitución como un conjunto de derechos de los particulares que limitara la intervención de la Administración<sup>1359</sup>.

En los últimos años se ha ido concibiendo una enorme producción doctrinal sobre la posición que los llamados derechos humanos de tercera generación deben de tener como principios informadores de todos los sectores normativos, definiéndose un derecho especial de protección jurídica sobre aquellos derechos que por su función pública y su vulnerabilidad necesitan una especial atención por el Estado, como es el caso del acceso del ciudadano a la cultura. La Cultura como derecho social se inserta en el constitucionalismo contemporáneo como un instrumento vital en el ámbito de la vida de los individuos, siendo una de sus manifestaciones más particulares el aprecio por el llamado Legajo Monumental, que da constancia de la identidad de una comunidad de individuos al rastrear los cimientos de su pasado histórico. La génesis de los llamados Bienes de Interés Cultural reconocido por el constitucionalismo contemporáneo muestra claramente el triunfo de la concepción pública del Legajo Monumental, quedándose como parte integrante del presente vivido de la sociedad a la que pertenezca. Las Constituciones de los Estados Democráticos y Sociales de Derechos no solamente diseñan la organización política y social sino al mismo tiempo convierte a la Cultura en uno de los instrumentos articuladores de la sociedad. Como afirma M<sup>a</sup> del Rosario Ibañez *La necesidad de cultura entra dentro del concepto de prestaciones vitales o procura existencial. Todo fenómeno que tenga una relación directa con la Cultura, independientemente de su calificación jurídica, puede ser considerado como integrante de este espacio o ámbito vital efectivo (...)* La Cultura se convierte en un instrumento de libre desarrollo de la personalidad del ciudadano, convirtiéndose el Patrimonio Histórico un instrumento de promoción cultural de primera importancia, por lo que va a gozar de una protección constitucional, de un valor jurídico supremo, Desde

<sup>1359</sup> ROLLA, G. "Bienes Culturales y Constitución", en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, núm. 2, 1989, p.167. *La relación entre Constitución y tutela de los bienes culturales es biunívoca: esta última no solo representa uno de los principios fundamentales de aquélla, sino que, además, el concepto de Constitución es al mismo tiempo susceptible de influir sobre la calificación jurídica de los bienes culturales. Si se sostiene una noción típicamente liberal de Constitución conforme a la cual su contenido fundamental debería ser el de definir los límites que separan la autonomía de los particulares de la intervención pública, estableciendo reglas más que fines por alcanzar, parece consecuente inscribir la disciplina de los bienes culturales dentro de la problemática de las limitaciones del derecho de la propiedad. Al concebir la Constitución como un conjunto de límites y de vinculaciones se ha llegado a una situación en la que solamente se han asumido como punto de referencia las disposiciones constitucionales relativas al derecho de la propiedad y a sus límites.*

este ámbito, la tutela jurídica del Patrimonio entra dentro de los llamados valores constitucionales naciendo el llamado Constitucionalismo Cultural. G.Rolla plantea el binomio Constitución-regulación jurídica del Patrimonio Cultural en los siguientes términos: *La relación entre Constitución y tutela de los bienes culturales es biunívoca: esta última no solo representa uno de los principios fundamentales de aquélla, sino que, además, el concepto de Constitución es al mismo tiempo susceptible de influir sobre la calificación jurídica de los bienes culturales. Si se sostiene una noción típicamente liberal de Constitución conforme a la cual su contenido fundamental debería ser el de definir los límites que separan la autonomía de los particulares de la intervención pública, estableciendo reglas más que fines por alcanzar, parece consecuente inscribir la disciplina de los bienes culturales dentro de la problemática de las limitaciones del derecho de la propiedad. Al concebir la Constitución como un conjunto de límites y de vinculaciones se ha llegado a una situación en la que solamente se han asumido como punto de referencia las disposiciones constitucionales relativas al derecho de la propiedad y a sus límites.*

No cabe duda que en el desarrollo del Estado Liberal, se iría definiendo un verdadero Derecho público delimitador de los puramente intereses privados de los bienes pertenecientes al Patrimonio Monumental. De esta manera se establecerá un procedimiento sancionador en el ámbito del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en el ámbito del Estado Liberal, generando un específico Derecho Penal. No obstante, cabe señalar que la tutela penal se regía por consiguiente en posiciones meramente patrimonialistas, que ponían el énfasis en el perjuicio económico-patrimonial que se derivaba de los atentados contra el patrimonio histórico, cultural y artístico. Este planteamiento daría lugar a un sistema de tutela penal indirecta, fundamentado en un régimen privatístico de los bienes artístico, sistema en que prevalecía el interés individual sobre el colectivo<sup>1360</sup>. La tipicidad penal se establecía no como un delito a un derecho colectivo, como en el ámbito legislativo actual, sino como una infracción al derecho individual de la propiedad privada, por lo que nuevamente nos encontraríamos un caso paradigmático de la preeminencia de los intereses privados sobre los colectivos<sup>1361</sup>. Desde esta óptica, la punibilidad se fundamentaba en el espíritu privatista en que estaba configurado el Código Penal decimonónico, al preocuparse excesivamente por la protección de la

---

<sup>1360</sup> ARIAS EIBE, Manuel José *El patrimonio cultural. La nueva protección en los arts. 321 a 324 del Código Penal de 1995*. Estudios de Derecho Penal Editorial Comares, Granada, 2001, p.113.

<sup>1361</sup> De esta manera Quinteros Olivares o Salinero Alonso afirma que *el sistema ideal de tutela penal de estos bienes no solamente tenderá a la preservación de los bienes históricos, sino también, a asegurar su disfrute público por parte de la colectividad, que posibilite el acceso a la cultura y participación del individuo en los procesos sociales y culturales de un sistema pluralista y democrático*. SALINERO ALONSO, C. *La protección del Patrimonio Histórico en el Código Penal de 1995*, Ed. CEDECS, Derecho Penal, 1º ed., Barcelona, 1997.



propiedad privada y las relaciones jurídicos económicos de carácter privado<sup>1362</sup>.

### 2.2.2. La transformación jurídica del Patrimonio Monumental Estamental en el Estado Liberal.

Con el advenimiento del Estado Liberal se produce un hecho trascendental en el marco socioeconómico: la transformación de la propiedad estamental, traducida en la desvinculación absoluto del propietario con matiz hereditario. Del mismo modo se va a ir produciendo en la configuración jurídica de aquellos bienes que habían pertenecidos a los estamentos privilegiados, tanto una desvinculación de sus originales dueños y una descontextualización, al perder la identidad originaria por lo que se habían creado. La desvinculación de los bienes estamentales del Patrimonio Monumental al ser nacionalizados por el Estado o incluso adquiridos en algunos casos por el dominio privado perdiendo su identidad originaria podemos considerarlo como uno de los hitos primordiales de la configuración del Patrimonio Monumental como bien de interés público.

	<b>Regimén jurídico de la propiedad de los bienes que configuran el Patrimonio Monumental</b>	<b>Valor de los bienes que configuran el Patrimonio Monumental.</b>
<b>Monarquía Absolutista</b>	Propiedad estamental de los bienes que configuran el Patrimonio Monumental	Vinculación al estamento al que pertenece, por lo que simboliza la exaltación del propietario del mismo.
<b>Estado Liberal</b>	Transformación jurídica de los bienes que configuran el Patrimonio Monumental.	Desvinculación del estamento al que había pertenecido.

#### 2.2.2.1. La tutela específica del Patrimonio Monumental Eclesiástico.

La titularidad jurídica de estos bienes estaba sustentada en principio en el ámbito del derecho de la propiedad privada. La propiedad eclesiástica nace en el Derecho Romano postclásico siendo su principal fuente las donaciones de los fieles, por lo que se fue incrementando a través de los siglos un importante

<sup>1362</sup> En contraposición a la tesis liberal de protección penal del bien histórico como bien patrimonial privado, actualmente se defiende una defensa de la tutela directa del patrimonio histórico como tal, por su intrínseco valor cultural, independientemente de su concreta titularidad, pública o privada, solamente puede ser guiada desde la consideración del mismo como bien jurídico colectivo BAJO FERNANDEZ, M.; PEREZ MANZANO, M. Manual de Derecho Penal Especial. Delitos Patrimoniales y Económicos, pp.38-39.



patrimonio mueble e inmueble fruto de legados e instituciones<sup>1363</sup>. Sin embargo, el carácter privado de estos bienes (al pertenecer a las distintas congregaciones, ordenes e instituciones pertenecientes a la Iglesia), no le hace perder el carácter de uso público, al ser utilizado con el objeto de llevar la fe al pueblo llano, por lo que tenía una utilidad que desbordaba lo exclusivo propio del coleccionismo privado de carácter burgués. Las medidas requisadoras de las propiedades eclesiásticas durante el proceso revolucionario francés y que se extendería posteriormente con la chispa revolucionaria liberal en otros países europeos acabarían definitivamente con el carácter sagrado e inviolable que había gozado desde la Edad Media. Tayllerand ya apunta la idea del carácter especial de la propiedad de los bienes eclesiásticos: *Es evidente que el clero no es propietario en el mismo sentido en que lo son otros, ya que los bienes de que hacen uso y de los que no pueden disponer se les entregaron no para su beneficio personal sino para que los empleasen en el desempeño de sus funciones*. Lo que subyace la idea como apunta Michael Burleigh que *la riqueza de la Iglesia no era propiedad en el sentido normal, sino algo que se le había dado para que hiciese buenas obras*. De este modo, desde que el 2 de noviembre de 1789, la Asamblea Francesa Revolucionaria aprobara la confiscación de los bienes eclesiásticos, la conversión de los bienes eclesiásticos en bienes nacionales en el seno de los ordenamientos liberales que irían naciendo durante todo el siglo XIX.

Entre los bienes eclesiásticos que irían a parar al dominio público estarían los llamados bienes culturales de interés religioso, que por su naturaleza especial se convertirían en objeto de una amplia discusión doctrinal que actualmente todavía no ha terminado. Sería en la propia esencia de su conceptualización donde se va a ceñir las distintas tesis contrapuestas sobre el objeto de tutelar. Sería la propia Iglesia la que va a ir elaborando una construcción doctrinal en el que considerará que el fin último de la configuración de estos bienes y la adquisición de la misma será en dar culto a Dios, el llamado interés religioso. Este interés religioso de exaltación fundamentaría el amplio número de bienes que la Iglesia va a ir adquiriendo a

---

<sup>1363</sup> La Iglesia Católica siempre tuvo bienes, incluso en los tres primeros siglos de su vida, cuando las persecuciones políticas la forzaron a la clandestinidad. Oficialmente carecía de bienes por ser sociedad proscrita, más de hecho los tenía. Con el triunfo de Constantino cambia la situación. La protección sustituye a la persecución, las donaciones se prodigan y económicamente pasa a ser la Iglesia rica y poderosa (...) En contraposición a las tesis patrimonialista de la Iglesia se opusieron un amplio número de sectas durante toda la Edad Media así como las críticas lanzadas desde las propias órdenes mendicantes. BIDAGOR, R. y BELTRAN FUSTERO, L. Rasgos más sobresalientes del régimen jurídico de las propiedades de la Iglesia Católica, *Revista crítica del Derecho Inmobiliario*, num.408-409, 1962, pp.306-308. Sobre la evolución de la propiedad eclesiástica también cabe mencionar la síntesis que realizó MORENO ANTON, María G. La enajenación de bienes eclesiásticos en el ordenamiento jurídico español Universidad Pontificia, Salamanca, 1987, Bibliotheca Salmanticensis, Estudios 93, Salamanca, 1987, pp.55-82; BIDAGOR, Los sujetos del Patrimonio Eclesiástico y el ius emines de la Santa Sede en el Patrimonio Eclesiástico *Estudios de la Tercera semana de Derecho canónico*, Salamanca, 1950, pp.28 y ss.

lo largo de su historia. De esta manera una gran parte de las partidas presupuestarias de las instituciones religiosas serían destinadas a la adquisición de los bienes del Patrimonio Histórico-Artístico no con ánimo de lucro, sino con una finalidad puramente espiritualista, ya que iba destinada a exaltar el culto divino, como en el caso de las órdenes religiosas que seguían las prescripciones de la regla benedictina *ora et labora*. El culto divino tenía que ser acompañada de una gama de bienes materiales que acompañara el boato solemne impulsado por el Concilio de Trento. La recreación estética de la belleza irá dirigida a la exaltación sacra como se puede observar en los múltiples textos de los teóricos de arte religioso que desde la Edad Media van orientando a esta finalidad<sup>1364</sup>.

Un gran número de textos normativos en el seno del ordenamiento canónico irá judicializando el interés religioso como valor primordial en el seno de los bienes históricos-artísticos. Sería en el canon 1497.1 del Código de Derecho Canónico de 1917 donde quedará recogido el concepto de bienes eclesiásticos: *Los bienes temporales, ya sean corporales, tanto inmuebles como muebles, ya incorporales, que pertenecen bien sea a la Iglesia Universal y a la Sede Apostólica, bien otra persona moral en la Iglesia, son bienes eclesiásticos*. En el canon 1497.2 se distinguía entre bienes sagrados y los bienes preciosos: *Se llaman sagrados los que han sido destinados al culto divino mediante la consagración o la bendición, preciosos aquello que tienen un valor notable por razón de arte, o de la historia, o de la materia*<sup>1365</sup>. En la esfera privada de la Iglesia los bienes pertenecientes a su Patrimonio Histórico-Artístico van a encerrar una específica valoración jurídica que lo va a diferenciar en su propio perfil de otros patrimonios privados<sup>1366</sup>. De ahí que podemos considerar que los Bienes de naturaleza religiosa se convertían en

<sup>1364</sup> Los textos del Abad Suger, San Bernardo, Hugo de Autum y una larga nómina testimonian el carácter litúrgico y de culto de los bienes que componen el Patrimonio Histórico de la Iglesia Católica.

<sup>1365</sup> MIGUELEZ, Lorenzo; SABINO, Alonso y CABRERO, Marcelino Código de Derecho Canónico (1917), Biblioteca de Autores Cristianos, 2009. En el derecho canónico contemporáneo, se precisa que al contrario que la categoría de los bienes sacros, los bienes preciosos son sempre beni ecclesiastici. SCHOUPE, Jean-Pierre, *Elementi di Diritto Patrimoniale Canonico*. Pontificia Università della Santa Croce, Milano, 2008, p.49. Giancarlo Beni precisa como *Alla categoria dei beni culturali religiosi appartengono, dunque, anche tutti i manufatti attraverso i quali la Chiesa cristiana vive, esprime e annunzia al mondo la sua fede nel Cristo incarnato, rivelatore e redentore. In quanto tali, i beni culturali religiosi non coincidono con i beni culturali ecclesiastici; con questa espressione, infatti, si intendono i beni culturali di proprietà ecclesiastica (...) Nel corso dei secoli la Chiesa ha espresso attraverso l'arte, l'artigianato, l'architettura, i libri liturgici, gli archivi, gli arredi per il culto infiniti aspetti della sua vita nel tempo*. MENIS, Giancarlo Beni Culturali nella cultura e nella società contemporanea, BELLINATIM Claudio Beni Culturali Ecclesiastici significato, promozione, valorizzazione Padua, 1994, p.35.

<sup>1366</sup> MARTINEZ BLANCO, A. Naturaleza de los bienes del Patrimonio Cultural Eclesiástico en *Anuario del Derecho Eclesiástico del Estado*, 13 (1997), pp.225-245.

instrumentos vitales para la oración y el estímulo espiritual. La selección y la valoración de los bienes que configuren este patrimonio específico se irá delimitando en función a esta finalidad esencialmente de culto sacro. Como apunta I. Aldanondo *los bienes históricos-artísticos se tutelaban más en función de su valor patrimonial y de su contenido religioso que en función de su valor artístico e histórico que indiscutiblemente les es intrínseco (...)* Muchos de estos bienes no son para la Iglesia únicamente testimonio de su pasado y objetos que tienen un valor en sí mismos, sino que cumplen una función cultural, litúrgica y devocional (...) Son, pues, bienes que forman parte de la vida de la Iglesia y están directamente ligados al uso de la comunidad religiosa<sup>1367</sup>. En la Circular de la Secretaría de Estado de 1 de septiembre de 1924 dirigido a los Ordinarios de Italia se enfatizaba la justificación espiritual del arte sagrado<sup>1368</sup>.

Con la aparición del Estado Liberal se va a ir delimitando una nueva relectura de la naturaleza jurídica de estos bienes, al intentar superponer el interés nacional como fundamento jurídico sobre el llamado interés religioso. De esta manera un gran número de bienes muebles e inmuebles, entre los que se encontraban catedrales, conventos en, colecciones de pinturas y esculturas serán contemplados como bienes de exaltación de la identidad nacional más que como bienes de contemplación divina, anticipándose en cierta forma a la identidad cultural que adquirirían en el ámbito contemporáneo<sup>1369</sup>. La tutela pública del Estado sobre los bienes históricos-artísticos eclesiásticos no solamente va a limitarse en una mera expropiación sino que va a ir surgiendo una política de respeto de la identidad religiosa, por lo que su protección pública irá oscilando en el desarrollo del Estado Liberal, e incluso se fueron

---

<sup>1367</sup> ALDANONDO SALAVERRIA, I. "La Iglesia y los bienes culturales (Aproximación al estudio de la disciplina canónica)", *Revista Española de Derecho Canónico*, 39 (1983), p.477.

<sup>1368</sup> ALDONONDO SALAVERRIA, Isabel, 1983, p.477.

<sup>1369</sup> Beatriz Gonzalez Moreno diseña una interesante doctrina jurídica en torno a la configuración de unos bienes culturales de interés religioso, donde se inserta el valor cultural y el fin de culto como núcleos esenciales de su esencia: .El concepto de bien cultural de interés religioso es más amplio que el de patrimonio cultural, porque no comprende sólo los bienes muebles e inmuebles cuya titularidad pertenece a entidades confesionales (...) El interés religioso denota un tipo de interés asociado al bien cultural y que modaliza su significado, de modo análogo a las referencias que en los textos legales suele hacerse, en relación con los bienes culturales, al interés artístico, histórico, científico o técnico. El interés religioso encaja en el concepto normativo de interés (...) *la relación entre un sujeto, que siente una necesidad, y el bien idóneo para satisfacer tal necesidad, determinada en la previsión general y abstracta de una norma (...) Esta necesidad deriva del sentimiento religioso del ser humano (...) Lo que tiene dimensión jurídica es solo la exteriorización de ese sentimiento (...) que puede afectar a los bienes culturales en la medida que satisfacen necesidades religiosas. En los bienes culturales de interés religioso convergen dos finalidades protegidas por el ordenamiento jurídico, el valor cultural y el fin de culto. El tratamiento del tema se ha orientado ha señalar una vía de equilibrio entre esta dualidad de intereses merecedoras de tutela y la conveniencia o no del sometimiento de estos bienes al Derecho común o una normativa específica que tenga en cuenta las exigencias del sujeto titular, la entidad religiosa.* GONZALEZ MORENO, Beatriz, "Fundamento constitucional de la acción promocional del Estado sobre los bienes culturales de interés religioso", *Patrimonio Cultural y Derecho*, 7, Madrid, 2003, pp.42-43.

elaborando algunas construcciones doctrinales en la que se consideraban que las cosas de arte entran en el dominio de la Iglesia y se sustraen a la legislación civil, adquiriendo inviolabilidad e inmunidad, como es inviolable e inmune el propietario de ellas, la Iglesia, y que la inmunidad de las cosas artísticas eclesiásticas remontan al derecho divino, por lo cual la Iglesia permanece exenta de toda ingerencia civil, aun tributaria. Uno de los ejemplos más claro de intervencionismo estatal en el ámbito del Patrimonio Eclesiástico fue el régimen de edificio de culto. Con independencia del valor histórico o artístico de los templos se planteó la cuestión de su régimen jurídico en relación con su posibilidad de incluirlo entre los bienes de dominio público<sup>1370</sup>. En el caso del derecho francés, podríamos citar a la ley de 9 de diciembre de 1905 de separación Iglesia-Estado, los edificios dedicados al culto pueden pertenecer a personas de derecho público o personas de derecho privado. Todos los construidos antes de la promulgación de la Ley de 1905 están en la primera categoría y son propiedad del Estado, de los departamentos o municipios; las catedrales pertenecen al Estado, las iglesias parroquiales a los municipios. En cambio, los construidos posteriormente a 1905 pueden ser propiedad privada o de asociaciones o instituciones legítimamente reconocidas. Como consecuencia, prácticamente todos los edificios destinados al culto, de valor histórico por antigüedad, son propiedad del Estado, pero tienen su uso las instituciones eclesiásticas. Al mismo tiempo se abre el camino a los Concordatos, como el de Polonia de 1925, que fue el primero en abordar la relación Iglesia-Estado en relación a la conservación del Patrimonio Monumental.

Si el fundamento de la intervención estatal en los bienes de arte es la insuficiencia de los particulares para su conservación, no es de aplicación cuando se trata de la Iglesia y de su ordenamiento, pues ésta tiene, a diferencia de los particulares, una propia organización administrativa. De ahí que los bienes eclesiásticos de interés histórico-artísticos que siguieron en poder del seno de la Iglesia daría como resultado la elaboración de un propio cuerpo administrativo y normativo interna de tutela que aunque prevaleciera un interés meramente religioso y no cultural, se convertiría en un ejemplo a seguir por los propios estados liberales. El eje de todo el ordenamiento canónico sobre el Patrimonio Monumental Eclesiástico residiría en la prohibición de la alineación de sus bienes, por lo que de esta manera en el Código de 1917, no se podrían vender sin permiso de la autoridad canónica competente. En los cc. 1530-1532 se disponía la invalidez con que se castigaba toda disposición que no hubiera obtenido previamente la autorización de la Sede Apostólica. Incluso en el C. 2347 se disponía las sanciones en que incurrían los que realizaran

<sup>1370</sup> Todavía en 1952 la doctrina francesa, especialmente Duez y Debeyre se cuestionaban si podían comprenderse dentro del dominio público las iglesias.

enajenaciones indebidas<sup>1371</sup>. El control de la enajenación de los bienes históricos-artísticos eclesiásticos llevaría a la propia Iglesia a elaborar su propio inventario, como aparece en el c.1522.2 y 3, en la que se obligaba a hacer un inventario exacto y detallado de todos los bienes inmuebles, de los muebles preciosos y de todos los demás, debiendo guardar una copia del mismo.

La propia Iglesia Católica iría diseñando una verdadera institucionalización de protección de su propio Patrimonio Histórico-Artístico, por lo que desde 1907 Pío X impondría a los Ordinarios de Italia la constitución del Comisariato Diocesano para la valoración de los bienes históricos-artísticos, vigilar su conservación y examinar los proyectos de restauración y de nuevas construcciones. Las Circulares del Secretariado de Estado se convertiría en otra de las fuentes del Derecho, siendo las del Cardenal Gasparri, de 15 de abril de 1923, n.16605, y la del 1 de septiembre de 1924, donde se notificaba la institución en Roma, en la Secretaría de Estado de Su Santidad, de una Comisión Central para el Arte Sacro en toda Italia, con el fin de mantener despierto y actuante en todas partes, mediante una acción propia de dirección, de inspección y de propaganda, en colaboración con las Comisiones Diocesanas, el sentido del arte cristiano y promover la correcta conservación y el incremento del patrimonio artístico de la Iglesia<sup>1372</sup>. La configuración de los Museos Eclesiásticos se convierte en un paso primordial por parte de la propia Iglesia para la conservación del Patrimonio. La Iglesia Católica, al igual que había realizado el propio Estado, fue articulando una red de museos eclesiásticos, con el fin de depositar para su mejor conservación bienes muebles eclesiásticos históricos-artísticos. Sin embargo, desde las primeras disposiciones sobre el origen de los Museos Eclesiásticos se hace constar su identidad propia frente a los museos seculares, el testimoniar a través de las colecciones de sus obras de arte, la actuación de la Iglesia en el tiempo<sup>1373</sup>. Cabe mencionar la Carta Circular de la Secretaría de Estado, del 15

---

<sup>1371</sup>El Liber Pontificalis y los Inventari conservados en el Archivo Secreto Vaticano documentan la constante atención puesta por los Papas en la ornamentación de las iglesias y cómo los objetos de arte fueron considerados rápidamente como patrimonio que se debía cuidar con atención. El 31 de octubre del 447 el papa León I prohibió a los obispos y a todos los clérigos, bajo pena de excomunión, e incluso, de reducción, al estado laical, de dar como regalo, cambiar o vender los bienes preciosos de las iglesias sin un motivo grave y sin el consenso de todo el clero. El 18 de agosto de 535 el papa Agapito I ratificaría dicha norma. El Concilio Constantinopolitano IV (869-870) en el canon 15, admite el rescate de los prisioneros como único motivo para alienar los bienes sacros de la Iglesia y en el II Concilio de Lyon en la constitución 22 se exigiría el permiso especial de la Sede Apostólica para la alineación de los bienes sagrados, declarando la invalidez de la alineación hecha sin este permiso y amenazando con la suspensión a los clérigos ,

<sup>1372</sup> FALLANI *Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia*, 1974, p.185.

<sup>1373</sup> Sobre el Museo Eclesiástico, la Carta Circular sobre la función pastoral de los Museos Eclesiásticos del 15 de agosto de 2001: *El Museo Eclesiástico testimonia la actuación de la*



de abril de 1923, en la que sugiere que se funde *donde no exista ya, y organizar bien un museo diocesano en el obispado o en la catedral*. En el mismo sentido cabría incluir la fundación de los Archivos Eclesiásticos, por lo que se va a promulgar una amplia normativa<sup>1374</sup>. El documento eclesiástico aparece insertado con varios valores patrimoniales, como la memoria de la vida de la Iglesia, la transmisión de la historia de la acción pastoral de los obispos de su diócesis y como instrumento pastoral<sup>1375</sup>. En el Código de 1917 se insertaría un amplio número de cánones referente a la configuración de Archivos Eclesiásticos, como el 304, en el que se<sup>1376</sup>, al mismo tiempo que desde el Magisterio Pontificio fue emanando una amplia producción de documentos sobre los archivos eclesiásticos, como la Circular de la Secretaría de Estado a los Obispos Italianos del 30 de septiembre de 1902<sup>1377</sup>.

La llegada del Estado Social y Democrático de Derechos no ha supuesto de ninguna manera la superación de la discusión doctrinal entre la naturaleza jurídica privada o pública de los bienes culturales de interés religioso sigue estando presente en la doctrina contemporánea italiana, desde las tesis de Maffeo quien defiende que las limitaciones rigurosas de la libre disposición y gestión de los bienes culturales de la propiedad privada no se justifican en relación con la Iglesia, ya que ésta posee una organización administrativa que permite que pueda conseguir los fines establecidos en los ordenamientos jurídicos, por lo que este tipo de bienes deben de estar regidos por un Derecho especial que reenvíe su contenido a la disciplina canónica y otorgue autonomía a las decisiones de la administración eclesiástica, por lo que

---

*Iglesia en el tiempo, por lo que ejerce el magisterio pastoral de la memoria y de la belleza (...) Narra la historia de la comunidad cristiana a través de lo que testifican las diversas ritualizaciones, las múltiples formas de piedad, las variantes formas de piedad (...). En cuanto instrumento pastoral sirve para descubrir y revivir los testimonios de fe de las generaciones pasadas a través de los restos sensibles, p.492.*

<sup>1374</sup> Sobre la importancia del Patrimonio Documental en el seno del Patrimonio Eclesiástico, cabe mencionar la Carta Circular la función pastoral de los archivos eclesiásticos del 2 de febrero de 1997: *La documentación conservada en los archivos de la Iglesia Católica es un patrimonio inmenso y preciso. Hay que mencionar, entre los más antiguos, los archivos episcopales y los archivos parroquiales(...) Por razón de su antigüedad y del material recogido, son importantes también los archivos de monasterios que cuentan con una larga y variada tradición (...) Conviene tener en cuenta los archivos que conservan la documentación de los Cabildos, catedrales o colegiales (...).*

<sup>1375</sup> Sobre los valores patrimoniales del Patrimonio Documental cabe mencionar estas notas de la Carta Circular del 2 de febrero de 1997: *Los archivos eclesiásticos (...) cultivan la memoria de la vida de la Iglesia y manifiestan el sentido de la tradición. Las informaciones recogidas en los archivos, de hecho, permiten la reconstrucción las vicisitudes de la evangelización y la educación en la vida cristiana (...).*

*Las fuentes históricas (...) han permitido y favorecido la reconstrucción de los acontecimientos y han hecho posible la transmisión de la historia de la acción pastoral de los obispos en sus diócesis (...).*

<sup>1376</sup> Los cánones del Código de 1917 que hacen referencias sobre el Archivo Eclesiástico serían el 372, 1; 375-384; 435.3; 470.4; 1010.1; 1522.6; 1548, 2; 2406.

<sup>1377</sup> Entre las Circulares sobre los Archivos Eclesiásticos: la Carta de la Secretaría de Estado a los Obispos Italianos del 12 de diciembre de 1907; la Circular de la Secretaría de Estado del 15 de abril de 1923...



revindica una posición concordatoria en la que los bienes culturales serían competencia común tanto del Estado como de la propia Iglesia, hasta las posiciones contrarias de Bellini al denunciar la resistencia de la autoridad eclesiástica a someterse a las disposiciones civiles sobre el Patrimonio Monumental al considerarlas una intromisión ilegítima en la libre facultad de disposición y gozo sobre los bienes.

<b>Tutela específica del Patrimonio Monumental Eclesiástico</b>		
<b>Monarquía Absolutista</b>	Bienes de interés espiritual	Vinculación estamental
<b>Estado Liberal</b>	Bienes de interés histórico y artístico	Desvinculación estamental

#### 2.2.2.2. La tutela del Patrimonio Monumental Monárquico.

La Monarquía define todo el régimen jurídico-institucional del Antiguo Régimen, llena todo el espacio público y al mismo tiempo proyecta su identidad en todos los ámbitos de la vida social y cultural, en la que el Patrimonio Monumental se convertirá en la instrumentalización vital de la legitimidad del poder supremo sobre sus súbditos. Este hecho va a dar lugar a la propia transformación jurídica de los bienes que configuran su patrimonio, al ir distinguiéndose entre aquellos que se identifican como dominio privado del Monarca de los que van a tener una simbología de exaltación propia de la propia institución, que a su vez se identifica con el propio Estado. La dicotomía entre ambas concepciones dará lugar a la consagración de un verdadero patrimonio nacional, que o bien en algunos casos serían adquiridos por el propio Estado a raíz de los procesos revolucionarios, o bien quedarían a modo de usufructos como meros símbolos de identidad de los nuevos Estados-Nación, herederos en cierta forma de las antiguas Monarquías Absolutistas.

<b>La transformación del Patrimonio Monumental Monárquico en el Estado Liberal.</b>	<b>Valor Patrimonial</b>	<b>Régimen Patrimonial</b>
<b>Monarquía Absolutista</b>	<i>Valor de exaltación de identidad pública de la Monarquía</i>	Dominio Privado/Público del Monarca.
<b>Estado Liberal</b>	Valor de exaltación de	Nacionalización de los bienes

	identidad pública del Estado-Nación	regios a raíz de los procesos revolucionarios. <i>Bienes en usufructo del Estado, en el seno del dominio privado del Monarca</i>
--	-------------------------------------	---

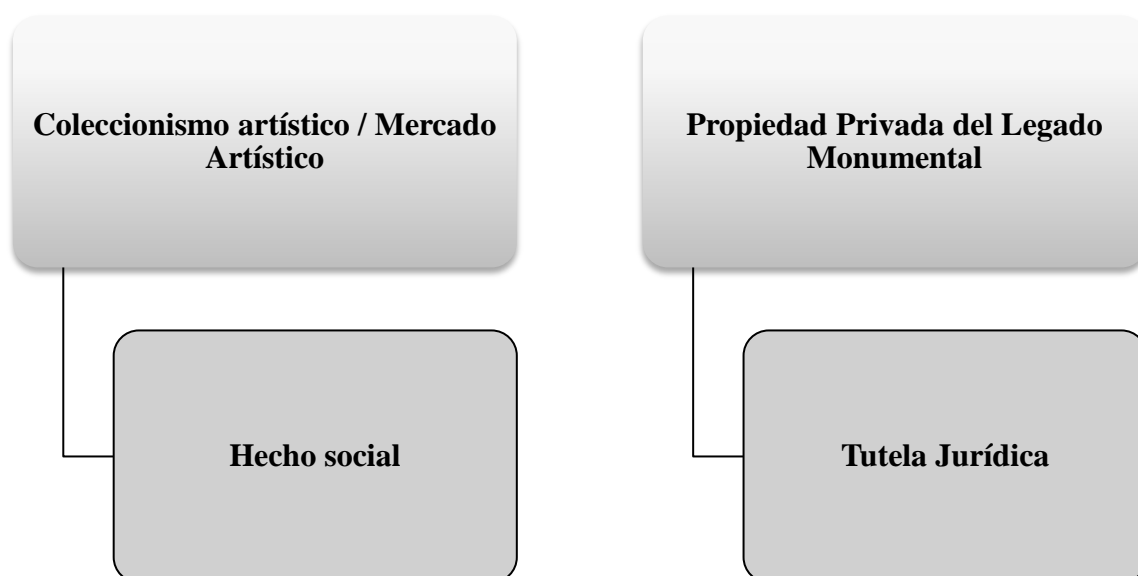
### 2.2.3 La tutela pública del Patrimonio Monumental de Dominio Privado.

#### 2.2.3.1 El Patrimonio Histórico-Artístico en el sistema de derechos y libertades individuales del Estado Liberal.

Al igual que ocurre en el resto del ordenamiento jurídico liberal, el derecho de la propiedad privada se convierte en el principio informador en la construcción del Patrimonio Histórico-Artístico en el Estado Liberal. El Patrimonio Monumental se genera a través de un hecho social determinante en toda sociedad humana: el coleccionismo de bienes históricos-artísticos, y un sujeto, el coleccionista, sea un individuo o una entidad colectiva, que adquiriere estos bienes para su uso propio por circunstancias variable, ya sea prestigio social, puro afán coleccionista o por ganancia económica. El coleccionismo de bienes históricos-artísticos va a generar al mismo tiempo un mercado, que durante el siglo XIX va a ir incrementándose notablemente, surgiendo una verdadera red de intercambios en el ámbito europeo e incluso americano. El coleccionismo artístico y el correspondiente mercado que genera ha suscitado al mismo tiempo un problema jurídico primordial: el derecho que sobre esos bienes va a tener su adquiriente, por lo que se va a ir configurando un Derecho Privado de los Bienes Histórico-Artísticos basado primordialmente en la primacía que el derecho de la propiedad suscita en el ordenamiento jurídico liberal. De esta manera el propietario privado del bien histórico-artístico tendrá un derecho inherente de gozo y disposición de los mismos, al igual que ocurre en el resto de sus bienes particulares. Sin embargo, podríamos cuestionar hasta qué punto el propietario podría gozar y disponer del bien histórico-artístico de manera absoluta, sin ningún tipo de límite, ya que por su propia naturaleza, el bien iría más allá de un simple interés particular, por lo que se iría articulando un interés general que le llevaría a actuar el Estado en su protección y conservación, dando lugar a la definición de una tutela pública de los bienes histórico-artísticos. No todos los bienes históricos-artísticos serán en principio tutelados por el Estado sino que solamente lo estarán aquellos que hayan pertenecido al pasado histórico de la sociedad y que sean identificados por unos concretos valores, por lo que surgiría la idea de un legado patrimonial con tutela pública.

El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico se considerará como Derecho Subjetivo en el ámbito del Estado Liberal. El goce o disfrute del

Patrimonio Histórico-Artístico no es lo en tanto a un derecho específico, sino en tanto al derecho de la propiedad. La consideración del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico como un Derecho Social sería erróneo considerarlo en el seno del Estado Liberal, perteneciendo simplemente a la esfera de los derechos individuales en el caso de la propiedad privada. El interés privado del Bien Histórico-Artístico se fundamenta en el sistema de derechos y libertades individuales nacida como primera generación a raíz de los procesos revolucionarios. No podemos hablar todavía de derechos subjetivos en el sentido del término contemporáneo, sino de derecho subjetivo público, que irá delimitando un derecho sobre el bien histórico-artístico. Alegre Avila lo sintetiza en los siguientes términos: *En un primer momento se acudió a la doctrina de las limitaciones administrativas de la propiedad privada, doctrina que veía en el conjunto de deberes y limitaciones impuestos a los propietarios unas a modo de restricciones o constricciones del ordinario régimen de uso y disposición, justificadas por razones de interés público y que, en todo caso, dejaban a salvo la esencia del derecho de la propiedad como poder de libre utilización y disposición de los bienes sobre los que recaía (...) Y así (...) se dirá que el propietario privado era una especie de ejerciente privado de funciones públicas, o bien, un custodio de interés público, resaltándose de ese modo, cada vez con más intensidad, la dimensión de función o interés público que cumplen estos bienes, más allá de la estricta perspectiva subjetiva del titular privado de derechos.*



*-El coleccionismo artístico como fenómeno social y cultural: La relación ente el propietario y el objeto artístico poseído.*

Desde los albores de la historia está presente en la identidad humana el hecho de poseer objetos, bienes como una necesidad inherente a su naturaleza, naciendo el hecho social del coleccionismo y con ello la figura individual del coleccionista. Desde perspectivas científicas distintas se han querido perfilar la identidad del fenómeno social y de los propios individuos que lo realizan. Una cuestión inicial lo constituiría su causa. Ignacio Díaz Ballerdi busca una explicación en el ansia de coleccionar en el propio sentido de supervivencia de lo humano: *¿Por qué se colecciona? En principio, se rastrean dos pulsiones básicas en el hecho de reunir objetos: la acumulación y la permanencia. La acumulación se puede conectar de manera bastante evidente con los desvelos por asegurar –y facilitar- la supervivencia del género humano sobre la tierra. La permanencia va más allá de la simple acumulación y revela su afán, implícito o manifiesto, de guardar para el futuro lo acumulado y posibilitar, incluso, su legado para la posteridad. Ambas pulsiones son las dos caras de una misma moneda –la primera, de carácter físico; la segunda de acento psicológico-: el instinto básico de supervivencia.* El antropólogo Josep Ballart lo perfila como *una afición notable de las personas individuales, y a menudo impulsiva, por adquirir, recuperar para uso propio y gozar de los objetos del pasado.*<sup>1378</sup>. Hacia 1920, el psiquiatra Henri Codet intentó sistematizar en cuatro factores los motivos psicológicos que llevaban al ser humano a coleccionar: 1. El deseo de propiedad, basado tanto en el instinto de conservación, como en una actividad expansiva de la propia personalidad que le lleva a preservar lo que está destinado a su desaparición. 2. La necesidad de una actividad libre y desinteresada, que le lleva a culminar una satisfacción afectiva e intelectual. 3. Un propósito de superación, de comparación y competición con los demás y 4. La tendencia a ordenar, clasificar, completar series de objetos individuales asumidos con un sentido específico<sup>1379</sup>. No todo tipo de objetos se colecciona, sino el coleccionismo nacera de una selección de objetos del propio coleccionista. De esta manera Ignacio Díaz Ballerdi señala: *¿Qué se colecciona? De todo y para todos los gustos. Y todo el mundo lo hace. Desde piedras, cerámicas o armas hasta amores o desamores, recuerdos o frustraciones. Cualquier objeto material –y cualquier objeto intangible- es susceptible de ser coleccionados (...).* Los objetos coleccionados reflejaran el carácter del adquiriente, como señala Antonio Urquizar la existencia de una colección lo define no tanto el repertorio de bienes presentes, como la relación que los propietarios sostienen con ellos, por lo que la carta de naturaleza de un objeto coleccionado es su categoría de objeto pensado<sup>1380</sup>, por lo que el coleccionismo artístico en su forma clásica necesitaría del establecimiento de una relación

<sup>1378</sup> BALLART, J. 2002, p.120.

<sup>1379</sup> La cita está sacada de CANO DE GARDOQUI GARCIA, José Luis *Tesoros y colecciones. Orígenes y evolución del coleccionismo artístico*. Universidad de Valladolid, 2001.

<sup>1380</sup> URQUÍZAR HERRERA, Antonio *Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en Andalucía del Renacimiento*. Marcial Pons Historia.

directa entre el poseedor y lo poseído que tenga al gusto y a la estimación formal de la pieza en su base<sup>1381</sup>.

De esta manera, el objeto coleccionado se convierte *en carta de presentación, señal o marchamos de su propietario, producto de una posición económica prominente o de intercambios comerciales ventajosos, botines de guerra, tributos en forma de objetos de valor u obras de arte, en todos los casos su posesión y exhibición, por reducido que sea el número de quienes acceden a su goce o contemplación, denotan un poder (económico, político, religioso) que se supone tanto más fuerte cuanto mayor y mejor sea la colección(...)* Las colecciones son el fruto de cuando menos una voluntad individual que selecciona, adquiere, conserva, enriquece y, eventualmente, expone el resultado de sus preocupaciones, tendencias y gustos personales.<sup>1382</sup> Al mismo tiempo en todo coleccionismo la pieza artística pasa de tener una función simplemente de utilidad para convertirse en significados, y en los términos de Jean Baudrillard lo más significativo de una colección son las apropiaciones intelectuales efectuadas sobre sus objetos, las lecturas que superan la función primigenia de las piezas para convertir su utilización en posesión y su atesoramiento en colección. Schollosser ya precisaría la presencia de percepciones familiares, políticas y hasta económicas de las colecciones artísticas que analizó propio de la relación conceptual entre propietario y objeto poseído. Existen por consiguientes en el seno del coleccionismo artístico motivaciones familiares y sociales, pero al mismo tiempo gustos estéticos, y sobre todo una función propagandista<sup>1383</sup>. Un interesante análisis de José Luis Cano de Gardorqui precisa como *el coleccionismo utilizado en la dirección y control de los objetos culturales se revela como instrumento poderoso para testimoniar el dominio socio-político e intelectual de las clases poderosas; como el coleccionismo, al incidir en ese sentido en la función ideológica de la cultura, permite analizar la ideología de estos grupos sociales minoritarios (monarcas, aristócratas, burgueses), su visión del mundo, ubicación social, preferencias de gusto, etc. Detrás de la colección se halla el individuo o coleccionista que recoge, selecciona, ordena, clasifica, singulariza en definitiva un objeto, tanto en cuanto le atribuye una unicidad que suscita el deseo de preservarlo de los efectos destructores del tiempo*<sup>1384</sup>.

Sin entrar en una historia del coleccionismo privado en el ámbito de la sociedad occidental, podemos percibir como hasta la Edad Moderna los bienes de valor histórico, artístico o cultural queda asumido en una esfera privada. En Roma el coleccionismo privado de bienes artísticos, especialmente de origen

---

<sup>1381</sup> Un interesante análisis sobre la relación del coleccionista con el objeto artístico poseído CHECA CREMADES, Sobre distintas maneras de ver y poseer (La situación del objeto artístico en las sociedades del Antiguo Régimen), *Revista de Occidente*, 441, 1993.

<sup>1382</sup> DIAZ BALERDI, Ignacio *La memoria fragmentada. El museo y sus paradojas*. Ediciones Trea, Gijón, 2008, pp.72-73.

<sup>1383</sup> Sobre las distintas funciones del coleccionismo artístico, POMIAN, K. *Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris, Venise: XVI-XVIII siècle*, París, Gallimard, 1987.

<sup>1384</sup> CANO DE GARDOQUI GARCIA, 2001, p.24.

heleno, se difunde en el patriciado, por motivos utilitarios de fines propagandísticos, a lo que habría que añadir el ingrediente religioso y materia a raíz de los numerosos expolios y botines de guerra, que posibilitaría la adquisición de múltiples obras<sup>1385</sup>. Durante la Edad Media se produce la configuración de un verdadero Patrimonio Real, las *cámaras del tesoro*, formado por una heterogeneidad de bienes muebles (joyas, piedras preciosas, etc), no solamente como mero gozo estético, sino con una plena finalidad política, que como apunta George Duby constituyen *su fuerza y son la imagen visible de su poder*. Más tarde, durante el Renacimiento fue adquiriendo importancia la génesis de las cámaras artísticas, a modo de studiolo, donde los humanistas, príncipes eruditos y otros mecenas artísticos reunían amplias colecciones de todo tipo de objetos, muchos de ellos valorados por su rareza y su autenticidad original<sup>1386</sup>. La burguesía va a ir adquiriendo poder en el Setecientos acaparando el mercado artístico y produciéndose dos tipos de coleccionistas: los curiosos, que cumplen una función snobista en la sociedad en que viven, siguiendo ciegamente los dictados de la época y los filósofos, eruditos, que se plantean un coleccionismo de tipo científico, sistemático, metódico y especializado<sup>1387</sup>. En el Estado Liberal se abre el camino a una participación del individualismo burgués en el mundo artístico, especialmente por parte de las grandes fortunas financieras que van a ir invirtiendo su capital en la adquisición de obras de arte. Hobsbawn apunta cómo *Pocas sociedades han estimado las obras de genio creativo como la burguesía del siglo XIX. Pocas han estado dispuestas a gastar su dinero tan libremente en el arte, y en términos puramente cuantitativos, ninguna sociedad anterior gastó tantas cantidades en libros nuevos y viejos, objetos, pinturas, esculturas, molduras de albañilerías decoradas y billetes para representaciones musicales o teatrales(...)*. Se estaba fraguando ni más ni menos el coleccionismo privado típico de las sociedades burguesas de la plenitud del Estado Liberal.

Una amplia nómina de coleccionistas burgueses va a llenar el amplio periodo cronológico de los siglos XIX y XX, con caracteres sociales muy diferentes<sup>1388</sup>. García Gómez señala varias funciones en el ámbito del coleccionismo privado, desde las que responderían a motivaciones estéticas, según el gusto y criterio personal del propietario, a ser convertidas en un instrumento de prestigio y de diferenciación social, ya que las colecciones serán para enseñárselos a los conocidos y para enorgullecerse de ellas, y por

<sup>1385</sup> Como apunta José Luis Cano de Gardoqui García puede hablarse aquí de un cierto grado de coleccionismo moderno, pues el particular al seleccionar y exponer de forma ordenada estas obras en el marco doméstico las inviste de nuevos significados –estéticos-contemplativos-, derivados de una vinculación personal con los objetos antes inexistentes.

<sup>1386</sup> Schlosser, Julius Von *Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío*. Akal universitaria, 2ª edición, 1988.

<sup>1387</sup> LEON, Aurora *El Museo. Teoría, praxis y utopía*. Cuadernos Arte Cátedra. Madrid, 2000, p.37.

<sup>1388</sup> MARIN-MEDINA, José *Grandes coleccionistas. Siglos XIX y XX*. Edarcon. Ediciones de Arte Contemporáneo.



último, con una función especulativa, al entender el arte como inversión productiva, naciendo con ello el mercado artístico<sup>1389</sup>. Las obras de la antigüedad con valor histórico y artístico van ganando impronta en los ámbitos de compras y ventas internacionales, siendo los preeminentes a la hora de su adquisición por el coleccionismo privado. No obstante, los artistas contemporáneos irán siendo poco a poco reconocidos y sus obras consideradas por algunos mecenas<sup>1390</sup>. Durante la etapa del incipiente Estado Burgués, se va perfilando un nuevo modelo de coleccionismo privado, especialmente en la figura de un erudito de corte romántico que va a ir adquiriendo obras de la Antigüedad, es el conocido como Anticuario, amante del arte.

Los bienes adquiridos en el ámbito del coleccionismo privado quedarían en su esfera privada, dando lugar al problema jurídico de la tutela jurídica del Estado sobre dichos bienes y el posible límite del goce y disfrute que en sí misma encerraba el derecho de la propiedad privada en el ámbito liberal. La adquisición del bien histórico por parte de un particular se convierte por consiguiente en un verdadero problema y en algunos casos en un verdadero obstáculo a la hora de configurar el Derecho Público de Patrimonio Histórico-Artístico, e incluso cuando se quiere definir un bien como de interés público por el significado simbólico que representa en sí mismo, ya que en muchos casos estarán dentro del ámbito de la propiedad de los particulares. Esto nos lleva a pensar si realmente el derecho del propietario privado de un bien histórico-artístico entraba a formar parte de aquel corpus de derechos patrimoniales, independientes a los derechos fundamentales que definían el status jurídico de un particular en el estado liberal.

#### **- El Patrimonio Monumental como bien inherente al propietario.**

No cabe duda que la concepción privada del Patrimonio va a ser determinante en la construcción jurídica del Bien Histórico-Artístico en el Estado Liberal. La sustitución del sistema sociojurídico del Antiguo Régimen sustentado en la propiedad estamental por la propiedad privada de libre

---

<sup>1389</sup> No es lugar en este estudio de profundizar sobre la historia del mercado artístico, pero cabe insertar algunas notas que nos puede aclarar la situación que se estaba viviendo en la Europa del siglo XIX: Ya desde la etapa del Renacimiento se tiene noticia sobre la figura del mercader del arte (BURKE, Peter, *El Renacimiento Italiano*, 1986, pp.118-119), siendo ya en la Roma del siglo XVII muy numerosos, calculándose que ya en 1764 en la plaza Navona se situaban más de cien agentes de compra. Algunos pintores de la época como Ribera, trabajarían como comerciante de arte, por lo actividad que sería criticada por instituciones como la Accademia de San Lucas (HASKEL, Francis *Patrones y pintores. Arte y sociedad en la Italia barroca*, Madrid, Cátedra, 1984, pp.130-134). Sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando el mercado artístico va a llegar a su verdadero auge, especialmente en París, centro cultural y artístico de Europa en este momento, donde la figura del marchante se convierte en un personaje relevante en el mundo social de la época, abriendo galerías donde abría el camino profesional a un gran número de artistas noveles, especialmente los pertenecientes a las vanguardias artísticas y las obras que por su valor histórico y artístico consideraban digno de venderse. Sobre el mundo del mercado artístico, FURIO, Viçens, *Sociología del arte*, Cátedra, Madrid, 2000.

<sup>1390</sup> GARCIA GOMEZ, Francisco *El nacimiento de la modernidad. Conceptos de arte del siglo XIX*. Universidad de Málaga, 2005, p.65.

circulación facilitaría la revisión de la concepción jurídica de los bienes materiales hasta ahora ajeno al tráfico jurídico, como ocurrió en el caso del Legado Monumental. El derecho al uso y disposición del Legado Patrimonial se convierte en un derecho inherente al propietario privado y por consiguiente el marco jurídico de referencia del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico serán los derechos civiles de carácter patrimonial y no su tutela constitucional. El Estado irá paulatinamente seleccionando una serie de bienes perteneciente al Legado Patrimonial con una función claramente ideológica de legitimar el orden social y político nacido del proceso revolucionario, por lo que se convertirá en un particular específico frente al resto de los particulares. Se había generado el llamado binomio tutela-propiedad del bien, en la medida que en principio el Estado podía tutelar solamente aquellos bienes que se insertaban a raíz de una declaración formal en el ámbito de su tutela, mientras que su incidencia sobre la esfera privada se diluía en una cuestión de límites de actuación del sujeto propietario del bien, las técnicas de policía administrativa. Con la crisis del Estado Liberal el incremento de los bienes del Legado Monumental con tutela pública y la crisis del derecho inquebrantable del derecho de la propiedad privada, abrirán el camino definitivo a un verdadero derecho social reflejado en el constitucionalismo contemporáneo. No será hasta la llegada del Estado Social y Democrático de Derechos cuando se defina la teoría de los bienes culturales por la escuela italiana encabezada por Giarnini, siendo superada la tutela jurídica en función del régimen de propiedad, reflejo de la proyección de la teoría de la función social de la propiedad y la constitución económica nacida en el constitucionalismo contemporáneo, por lo que se ha ido superando la concepción tutelar en función del sujeto propietario del mismo, dando paso a unos intereses suprapatrimonial basado en la concepción de un valor cultural que va más allá de la esfera privada de un bien. Se rompe por consiguiente el binomio tutela-propiedad propio del Estado Liberal, por lo que se va a constituir como señala Alonso Ibañez un marco en que la gestión del bien en cuanto soporte material no va a ser de exclusiva competencia del titular patrimonial, sino que en ese marco se va a dar una inmisión pública que va a coexistir en la gestión de ese bien con el titular patrimonial. La nueva situación jurídica de los bienes históricos-artísticos representa la inmersión del concepto de la función social de la propiedad al concebir estos bienes una utilidad pública que va más allá de los límites de la propiedad privada, surgiendo la idea de un valor universal inherente al propio bien independiente de quien sea su propietario.

El derecho a la propiedad privada del Bien Histórico-Artístico nacerá en el seno del sistema de derechos y libertades individuales del Estado Liberal, desde la perspectiva de un Derecho Público Subjetivo, no como Derecho social, en línea a la concepción inmovilista del propio derecho de la propiedad privada. Durante el transcurso del Estado Liberal se van a ir perfilando el sistema de los derechos fundamentales sustentado en el individualismo

jurídico, a raíz del desarrollo del liberalismo como corriente política e ideológica que va a llenar el espacio político-jurídico que va a llenar prácticamente el espacio temporal que transcurre desde el siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna este periodo se va a caracterizar por el triunfo de los derechos individuales, que irán abriendo el camino posterior a la delimitación de la llamada segunda generación de derechos fundamentales, los llamados derechos sociales<sup>1391</sup>. La nueva realidad jurídica que va a surgir en el nuevo modelo de Estado a raíz de las revoluciones burguesas tendrá su impronta en la propia configuración del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico. Se puede hablar desde esta perspectiva de la existencia de un Derecho Privado del Patrimonio Histórico-Artístico en el Estado Liberal, cuyos derechos no están recogidos directamente por la propia normativa, sino que se ha ido construyendo en virtud de los límites establecidos por el derecho de la propiedad privada recogido en la codificación civil y en los propios constitucionalismos liberales, que lo aleja de un derecho social propio del Estado Social y Democrático de Derechos.

Desde esta perspectiva, el Bien Histórico-Artístico en el Estado Liberal se convertiría en un Bien Jurídico cuya protección quedaría más identificada con los Derechos Patrimoniales que con los Derechos Fundamentales, al poder ser adquirido en la esfera privada como cualquier bien material, y al estar limitado su uso directo sólo a un sector de la población. Por consiguiente, la construcción jurídica que va a ir creándose en torno al Bien Histórico-Artístico en el ordenamiento liberal va a quedar sujeta al límite inherente a los derechos patrimoniales y no a su concepción universal de los derechos fundamentales. El derecho de los propietarios de estos bienes históricos-artísticos estará fundamentado al igual que en la construcción jurídica del resto del ordenamiento jurídico en el derecho de goce y en el derecho de disposición. Cualquier propietario podrá en principio comprar y vender sus bienes históricos-artísticos ilimitadamente a otro particular siempre que en teoría no se haya incluido en la protección del Estado, a través de algunos instrumentos jurídicos como el caso del inventario, que definirá cual serán los bienes que se deben de proteger según el valor que se le atribuya, especialmente los que estén identificados al valor ideológico. No obstante, debido a la parca organización administrativa el Estado tendrá un margen muy limitativo de actuación.

De ahí que la construcción pública de un concepto jurídico de Patrimonio Histórico-Artístico no defina en sí mismo un derecho social llamado a disfrutar todos los ciudadanos en el seno de la sociedad liberal, sino

---

<sup>1391</sup> Fernando Vallespín delimita entre los Derechos Fundamentales del llamado Estado de Derechos cuatro grandes bloques de derechos y libertades: 1º) Los llamados Derechos de Libertad, entre los que se encontrarían el Derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la libertad religiosa o de creencias, etc; 2º) Los Derechos de igualdad ante la ley; 3º) Los Derechos procesales, especialmente el derecho a la tutela judicial y 4º) Las Garantías institucionales, especialmente el matrimonio y familia, la propiedad y el derecho de herencia.

que solamente se desarrollaba el derecho en función a la titularidad jurídica. Será solamente en el seno del ámbito de los Derechos Patrimoniales, en función a su titularidad se reconoce un derecho subjetivo. La Titularidad Jurídica de la propiedad es la que define la existencia o no de un derecho sobre el Bien Jurídico, por lo que el propietario privado podrá defender su derecho a disposición o goce en virtud de la Teoría Jurídica del Derecho de la Propiedad en el Estado Liberal y no en función a un interés social. Desde esta perspectiva, el Estado solo marcará una delimitación de su disfrute en función a que sea propietario o no del Patrimonio Histórico-Artístico a conservar, ya que en caso contrario quedará fuera de su ámbito de actuación, por lo que el propietario privado poseerá un derecho sobre el bien en función a la concepción liberal del derecho de la propiedad.

No cabe duda que el derecho del propietario sobre el bien histórico-artístico que posee se inserta en cierta manera en el ámbito de los derechos subjetivos públicos del Estado Liberal. La delimitación de la cultura como derecho subjetivo, inherente al propio ser humano, va a ser una de las conquistas jurídicas determinantes en el paso de un Estado de Derechos y un Estado Social y Democrático de Derechos, y que habría que insertar en el propio concepto general del sistema de los Derechos Fundamentales<sup>1392</sup>. En el Estado de Derechos se fue construyendo el concepto de derechos públicos subjetivos entendidos como esferas de actividad privada contrapuestas a la actividad pública, como límite a la actividad estatal, hecho que llevó a identificarlos solamente con los derechos civiles y políticos, negando por consiguiente la existencia de unos derechos culturales inherentes a la persona. De este modo la teoría decimonónica de los derechos públicos subjetivos se fundamentaba en el principio, según el cual, frente a la autoridad del Estado soberano no podía existir más que posiciones de sujeción<sup>1393</sup>. Pérez Luño los

<sup>1392</sup> La conceptualización del Derecho subjetivo en la Teoría del Derecho ha sido interpretada desde perspectivas muy diversas, que Benito de Castro Cid delimita en tres: la teoría de la voluntad, defendida inicialmente por Savigny y Windscheid, por el que el derecho subjetivo es un poder atribuido a la voluntad del sujeto, una esfera de autonomía que el ordenamiento jurídico pone a disposición del individuo; La teoría del Interés, defendida por Ihering, en la que el derecho subjetivo se caracterizaría por un interés jurídicamente protegido, cuya efectividad dependería de la iniciativa del propio titular y 3º) La teoría de la posición jurídica, que siguiendo a Kelsen, no es en última instancia, más que la posibilidad que ciertas normas reconocen al sujeto de poner en funcionamiento los mecanismos previstos en ellas para lograr que otros sujetos cumplan los deberes jurídicos que les incumben. Su relación con el Derecho Objetivo estaría definida desde dos puntos de vista totalmente opuesto: la postura iusnaturalista, en las que se defendería la tesis de que los derechos subjetivos son inherentes a la subjetividad jurídica, por lo que preexistiría a las leyes políticas que regulan su existencia y las positivistas, por lo que los derechos subjetivos solamente existen si han sido reconocidos por la autoridad política pertinente. El contenido nuclear del Derecho Subjetivo estará delimitado por un conjunto de facultades que cada derecho otorgaría a su titular tres esferas de actuación: las facultades de uso y disfrute, de disposición y pretensión.

<sup>1393</sup> El término Derecho Público Subjetivo se creó en el seno de la escuela del Derecho Público alemán en el siglo XIX, como especificación del concepto más genérico de Derecho subjetivo,

define como *una categoría histórica adaptada al funcionamiento de un determinado tipo de Estado, el liberal, y a unas condiciones materiales que han sido superadas por el desarrollo económico-social de nuestro tiempo*<sup>1394</sup>. En su concepción histórica, el papel de los derechos subjetivos públicos sería primordial ya que siguiendo a Gustavo Zagrebelsky, *el Estado, de ser algo al margen y por encima de la ley, como era concebido por el absolutismo monárquico, se situaba ahora dentro de y sometido a la ley, y se configuraba así como uno de los muchos sujetos disciplinados por el derecho (...) Se trataba de un gran paso adelante que reequilibraba las posiciones, un importante esfuerzo por librar a los individuos de la actuación arbitraria del Estado. (...) Era válido en relación con el Estado como administración pública, pero desde luego no en relación con el Estado como legislador (...) Se podría caracterizar al Estado desde dos aspectos: El Estado-persona, constituido por su concreta organización, encabezada entonces por el gobierno del rey; y el Estado-ordenamiento, es decir, el conjunto del derecho vigente, encabezado por el legislador. Evidentemente, solo el primero podía considerarse sujeto a la ley, lo que hubiera podido constituir la base de una auténtica relación jurídica con los ciudadanos. El segundo, en cambio, era por su propia naturaleza señor de la ley (...) Desde el punto de vista del Estado como legislador, los derechos no podían concebirse como una limitación al mismo, sino sólo como una autolimitación y como una concesión. Los derechos existían en la medida en que el legislador los hubiese no ya reconocido, sino creado, y el derecho subjetivo del individuo respecto a la autoridad pública consistía exclusivamente en la capacidad de invocar normas jurídicas en su propio interés*<sup>1395</sup>.

La delimitación de una subjetivización del derecho en el ámbito patrimonial histórico-artístico en el Estado Liberal sería muy cuestionable, no solamente por el hecho de la inexistencia de un interés general de carácter social en la jurisdicción del patrimonio cultural, sino por el hecho de la existencia de un poder estatal perfectamente limitador de derechos más allá de su ámbito. Como señala Carlos López Bravo, las constituciones europeas del siglo XIX, silencian toda referencia a la acción estatal en materia de Cultura, por lo que de esta manera la Cultura, queda circunscritos a órbitas estrictamente privadas<sup>1396</sup>. Al contrario, en el Estado Social y Democrático de Derechos, el derecho a la cultura no es solamente un derecho subjetivo oponente al propio Estado, sino como afirma Pérez Luño *la necesidad de reconocer una serie de situaciones subjetivas en el terreno de la Cultura constituye un presupuesto básico en la formación del Estado Social y Democrático de Derechos*<sup>1397</sup>,

---

expresión del individualismo en el pensamiento positivista, aunque sus raíces son más antiguas.

<sup>1394</sup> PEREZ LUÑO, 2005, p.34.

<sup>1395</sup> ZAGREBELSKY, Gustavo *El derecho dúctil. Los derechos, justicia*. Editorial Trotta, 5ª edición, 2003.

<sup>1396</sup> LOPEZ BRAVO, Carlos *El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales*. Universidad de Sevilla, Sevilla, 1999, pp.128-129. Cabe mencionar la obra de J. Prieto de Pedro titulada *Cultura, Culturas y Constitución*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

<sup>1397</sup> PEREZ LUÑO, E. *Los Derechos Fundamentales, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 1984, p. 48.

ya que el acceso a la Cultura se convierte en un instrumento vital a la personalidad de cualquier individuo, repercutiendo en la esfera subjetiva del mismo, por lo que el Estado tendrá como fin su divulgación y protección con miras a alcanzar la igualdad y el ejercicio de la libertad.

El acceso al Patrimonio Histórico-Artístico se convierte en un instrumento vital en la divulgación de la Cultura, que en relación a la teoría de los derechos públicos subjetivos, va a tener una consideración diferente en ambos modelos de Estado. En el Estado Liberal, el derecho del Patrimonio Histórico-Artístico se convertirá en un derecho subjetivo en la medida que se considera un instrumento jurídico frente a las pretensiones del Estado a acceder a la esfera privada, por lo que no es un derecho inherente al individuo, sino que dependerá de la titularidad del bien histórico-artístico al que se refiera, mientras que en el caso del Estado Social y Democrático de Derechos, el acceso al Patrimonio Histórico-Artístico entrará a formar parte de los Derechos Sociales adherido a la naturaleza del propio ser humano<sup>1398</sup>. El interés jurídico que subyace en el ámbito de los derechos subjetivos de goce y disfrute del Patrimonio Histórico-Artístico en el Estado Liberal estará sustentado en una cuestión de propiedad del bien a considerar, mientras que en el Estado Social y Democrático de Derechos el interés jurídico a proteger desde la perspectiva subjetiva del derecho irá más allá del ámbito de su propiedad, al desarrollarse plenamente una concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico, independientemente de su titularidad<sup>1399</sup>. Desde esta perspectiva podríamos plantearnos como el Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en el Estado Liberal no se considera un Derecho Social en el sentido contemporáneo del término, sino que se incluiría en el seno del conjunto de Derechos Civiles y Políticos, propio del individualismo jurídico desarrollado en el llamado Estado de Derechos, en la ya clásica clasificación de la generación de los derechos humanos

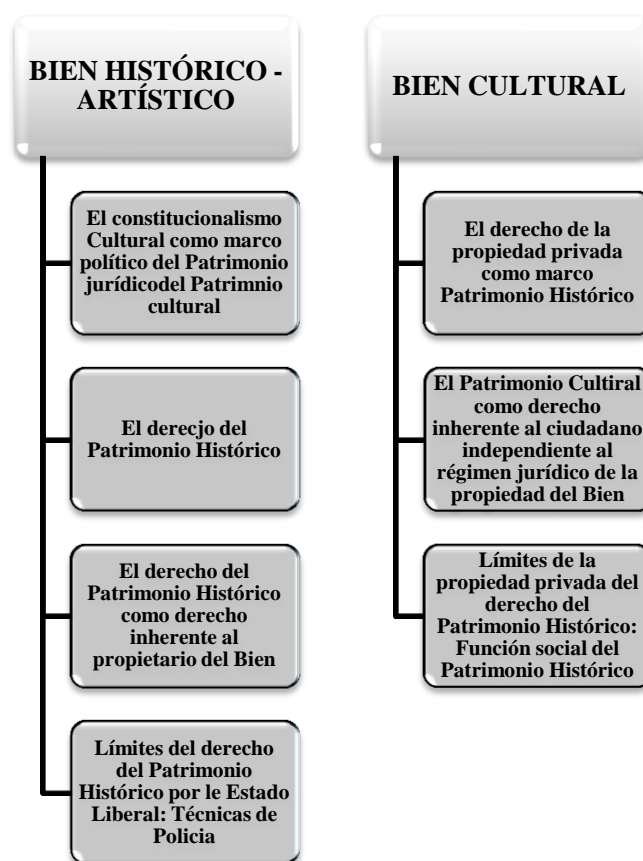
Sin lugar a duda en el modelo actual del Estado del Bienestar, el derecho al Patrimonio Histórico-Artístico se insertaría dentro del sistema de derechos de la segunda generación, como derecho social, aunque solamente reivindicable como libertades positivas, en la ya clásica distinción del propio Bobbio, mientras que en el Estado Liberal el derecho del Patrimonio Histórico-Artístico no es un derecho social plenamente establecido, se inserta como un derecho de interés particular, fundamentado en su goce y disfrute en función de su derecho a la propiedad privada. Solamente cuando el Estado Nacionalista

<sup>1398</sup> En la legislación contemporánea cabe subrayar como apunta A. Torres del Moral que la existencia de un derecho a la cultura, como derecho de acceso a los bienes culturales, como servicio público, inclinó al constituyente a darle tratamiento de principio rector de la política económica y social y no de derecho público subjetivo. TORRES DEL MORAL, A. *Principios del Derecho Constitucional Español*. Madrid, 1992, p.584.

<sup>1399</sup> PULEO, Alicia H. *Los derechos humanos. Un legado de la modernidad*, en QUESADA CASTRO, Fernando Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política. Editorial Trotta, 2008, p.186-188.



considere que un bien debe ser protegido para su conservación y salvaguarda de los intereses privados, lo hará no con una finalidad social, sino como un interés nacional, que representará los intereses del propio Estado como sujeto jurídico individual y no la sociedad en sí como ente abstracto que acoja a la totalidad de la sociedad. En definitiva, el Derecho Subjetivo del Patrimonio Histórico-Artístico en el Estado Liberal no se traduce en un derecho social para toda la comunidad, ya que la Cultura se considera un fenómeno restringido para un sector minoritario, por lo que su reclamación ante la autoridad administrativa se reduce a un derecho de propiedad sobre el bien, y no se reivindicará como valor superior del ordenamiento jurídico-político, ni como principio constitucional para la actuación de los poderes públicos, propio ya de un sistema de derechos y libertades del Estado Social y Democráticos de Derechos.



#### **2.2.3.2 Los límites del derecho de la propiedad privada: Las técnicas de la policía administrativa.**

En la amplia y dispersa normativa que va a promulgarse en el ámbito del Estado Liberal podemos extraer algunos de los instrumentos administrativos en la tutela patrimonial que en las legislaciones

contemporáneas se han seguido desarrollando, siendo probablemente el límite del derecho de la propiedad privada el obstáculo más claro a la hora de su delimitación. La acción de la Administración en el Patrimonio Histórico ha correspondido a un Estado Policía, respondiendo sus modos de actuación a las llamadas técnicas de policía especial. Ha sido una acción de limitaciones concretas y específicas del derecho de la propiedad de los bienes declarados monumentales, derecho configurado bajo una concepción del mismo claramente privatista.

La acción administrativa se podría agrupar en las siguientes modalidades:

1º) La declaración formal del bien como interés público.

2º) La restauración y la conservación del patrimonio inmobiliario de carácter histórico.

3º) La normativa urbanística de protección monumental, especialmente en los referentes a la llamada estética urbana,

4º) La regulación del tráfico de los bienes muebles, especialmente en el ámbito de las exportaciones.

5º) La protección del Patrimonio Arqueológico, concretamente en los casos de hallazgos fortuitos o por excavaciones arqueológicas promovidas por la Administración.

*- La declaración formal del Patrimonio Monumental: un límite a la libre disponibilidad de los bienes de interés histórico y artístico. Catalogación e Inventariación como instrumentos administrativos.*

Uno de los problemas más complejo a la hora de elaborar el concepto jurídico del Patrimonio Monumental va a ser la selección de bienes histórico-artísticos que van a cambiar en función de los factores sociales, culturales y políticos en que este inmerso la sociedad. En los últimos años la construcción jurídica del Bien del Interés Cultural ha supuesto un paso primordial en la selección de los bienes que se han ido integrando como susceptibles de ser protegidos jurídicamente, ampliándose considerablemente no solamente el número de los mismos, sino incluso en su propia tipología<sup>1400</sup>. No cabe duda

<sup>1400</sup> La Unesco desde su creación ha ido definiendo el carácter seleccionador de los bienes que comprenden el legado patrimonial. Ya el 14 de mayo de 1954 en el artículo 1º del Convenio para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflictos Armados haría una primera clasificación, desglosado en tres bloques: A) *Los bienes, muebles e inmuebles, que tenga una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como elementos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcción que por su conjunto afectan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico,*

que en el Estado Liberal se dió un paso considerable a la hora de seleccionar los bienes muebles e inmuebles a proteger, pero su número va a ser muy limitado, al quedar solamente vinculados a aquellos que mostraran una axiología claramente nacionalista de corte estético-historicista. ¿Qué bienes históricos-artísticos encierra la categoría jurídica de Monumento Histórico? En principio, podemos resaltar la heterogeneidad de bienes que aparecen contemplados en los ordenamientos jurídicos de los Estados Liberales, hecho que al mismo tiempo podemos observar en el ámbito de la categoría jurídica de Bien Cultural<sup>1401</sup>. Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos se ha tachado de incoherencia, falta de sistematización e incluso falta de rigor científico la selección de los bienes que fueron configurando el Patrimonio Histórico-Artístico, no por ello se debe omitir el papel significativo que representó en el camino de la gestación de una verdadera concepción jurídica. El Estado Liberal hizo una selección parcial de los bienes a proteger, más bien motivadas por circunstancias políticas que científicas o estéticas, pero ello no es razón para obviar el esfuerzo que supuso una primera clasificación que superara la concepción clásica del mundo artístico. No cabe duda que la selección patrimonial se irá haciendo más rigorista a medida que la historiografía científica, la crítica artística, la aparición de la opinión pública o los informes de las instituciones culturales, como las Academias de la Historia y de Bellas Artes o las Sociedades Conservacionistas vayan teniendo un papel más representativo en la sociedad<sup>1402</sup>. Sin embargo, muchos bienes históricos-

---

*así como las colecciones importantes de libros, archivos o reproducciones de los bienes antes definidos. B) Los edificios cuyo destino principal sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales definidos en el apartado a) y C) Los centros urbanos que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y b), que se denominarán centros monumentales.*

<sup>1401</sup> LOPEZ RAMON, F. "Reflexiones sobre la indeterminación y amplitud del patrimonio cultural", en AA.VV. *Patrimonio Cultural, actas del III Encuentro Interdisciplinar sobre Historia de la Propiedad* del 28-31 de mayo de 2003 en Salamanca, Madrid, 2003, pp.525-548.

<sup>1402</sup> La propia evolución del concepto de las Bellas Artes influiría decisivamente en la configuración del Patrimonio Monumental. Larry Shiner en su magnífica obra *la invención del arte* plantearía su tesis que la categoría de las bellas artes es una invención moderna, donde la línea que separaría el arte y la artesanía fue resultado de cruciales transformaciones sociales que tuvieron lugar en Europa a lo largo del siglo XVIII. El término arte había surgido en el mundo griego y se refería a la habilidad o destreza, tanto manual como mental, que requieren o demuestran ciertas actividades basadas en reglas o normas. En este sentido, médicos y carpinteros se incluían junto a escultores y pintores. Sería en la Edad Media cuando se institucionaliza la distinción entre artes liberales y artes mecánicas, por lo que se diferenciaba las artes intelectuales y nobles propias del hombre libre, y aquellas consideradas innobles, por basarse en un oficio manual redistributivo y realizado mediante esfuerzo físico. La arquitectura y las artes figurativas se encontraban entre las primeras, con una consideración social muy inferior a las siete artes liberales (gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y música). El menosprecio por las artes figurativas comenzaría a cambiar durante el Renacimiento y a mediados del siglo XVIII se introduce el concepto Bellas Artes, por lo que la arquitectura, la pintura y la escultura, se incluirían institucionalmente dentro de este grupo de

artísticos que actualmente consideraríamos inserto en el ámbito del Legado Patrimonial quedarían excluidos, como fue el caso de los pertenecientes al Patrimonio Inmaterial, o sea aquellos que no tienen soportes físicos que les dé materialidad, como puede ser las lenguas, la música o las costumbres o las tradiciones populares<sup>1403</sup>. No obstante, cabe precisar que a pesar de que en la regulación normativa no aparece el Patrimonio Inmaterial, ya va a ir surgiendo en la sociedad liberal claros indicios de una concienciación patrimonial de este tipo de bienes especialmente por el papel que la investigación científica, el descubrimiento de otras culturas y la labor de los literatos fueron realizando en este sentido. Al mismo tiempo se iría dando los pasos para la existencia de un patrimonio intelectual que derivaría en el ámbito contemporáneo en los derechos de autor como exponente del reconocimiento de la creatividad individual del ser humano. La judicialización de la selección patrimonial a la hora de construir la categoría jurídica del Patrimonio Monumental tendrá una concepción formalista mediante un criterio de identificación, por lo que requería de la comprobación de la existencia de valores superiores externos a los propios bienes, externos, al ser dado por áreas de conocimientos ajenos al mundo del Derecho como la Historia, el Arte o la Arqueología, por lo que llevaba a configurar valoraciones *estetizantes* del Patrimonio<sup>1404</sup>. M<sup>a</sup> del

---

artes que había que promocionar, junto a la música, la poesía, la retórica o la danza, excluyéndose la artesanía y las ciencias, por lo que la amplia diversidad de actividades que englobaba el arte quedaba limitada al término de Bellas Artes

Durante el siglo XVIII se va a ir construyendo la categoría de Bellas Artes, término que se impone sobre otros utilizados comúnmente como artes elegantes, artes nobles, artes elevadas. La fundamentación conceptual estaba sostenido en una combinación de cuatro principios: dos de ellos –genio e imaginación– que se referían a la producción de la obra de arte y el los otros dos –el placer versus la utilidad y el gusto– se referían a la utilidad y a su modo de recepción, caracteres que hacían unir en principio en un mismo concepto disciplinas aparentemente divididas, que servían para ir dividiendo de las ciencias y las artes liberales. Tradicionalmente se considera que la obra de Charles Batteux, *Les beaux arts réduits à un même principe* (las bellas artes reducido a un único principio) de 1746, como el primer libro de gran difusión que integraba el término *beaux arts* dentro del conjunto restringido de artes, como la música, la pintura, la escultura, e incluso la arquitectura. Sin embargo, es la impronta de la *Encyclopédie* (Diderot y D’Alambert), entre 1751 y 1752 cuando se conceptualiza definitivamente el término. En el discurso preliminar de la *Encyclopédie*, en el árbol del conocimiento, se establece que algunas de las artes liberales ha sido llamadas *beaux arts* sobre todo porque tienen como propósito dar placer. Las Bellas Artes englobarían desde este momento la pintura, la poesía, la escultura, la música y la arquitectura, que se distinguían de las artes liberales por el placer y ser el producto del genio inventivo. Entre 1750 y 1780 la nueva categoría y el término se habían extendidos en todos los círculos intelectuales de Europa SCHINER, Larry *La invención del arte. Una historia cultural*. Paidós Estética

<sup>1403</sup> El concepto de Patrimonio Inmaterial se recogería en la Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco de 2003, quien entiende como tal los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

<sup>1404</sup> José Luis Álvarez señala los métodos que se han utilizado por las distintas leyes relativas a la protección del Patrimonio para determinar el objeto al que se deben de aplicar se pueden

Rosario Ibáñez señala el *criterio de identificación –interés específico de los objetos integrantes del Patrimonio– es una realidad independiente al objeto, es una cualidad objetiva, externa al mundo jurídico puesto que su existencia depende de su posible reconocimiento en un juicio valorativo; la existencia de ese interés necesita una previa valoración. Durante la etapa legislativa precedente a la vigente, el criterio determinante de la pertenencia de un objeto al sistema de protección era el resultado de una operación de juicio, una operación valorativa de la existencia misma del interés específico requerido. El interés y la antigüedad eran los criterios que determinaban que un bien fuera susceptible de ingresar en el Patrimonio, pero no tenían la suficiente fuerza como hacer pasar a formar parte de ese Patrimonio automáticamente a los bienes que los reuniesen. Para ello era necesario que previamente se valorara técnicamente ese interés, valoración que correspondía a la Administración, a través de la tramitación de un expediente que concluía o no con la declaración formal de un bien como monumental, que eran a los que se aplicaba la legislación protectora. De esta forma, el criterio formal venía a superponerse a todos los demás a la hora de determinar los bienes tutelados (...)*<sup>1405</sup>. Ello implicaba la existencia de un criterio formal a efectos de determinación con transcendencia jurídica de los bienes integrantes del Patrimonio

Como señala M<sup>a</sup> Rosario Ibáñez *la evidencia de que no se puede proteger aquello que desconocemos ha guiado, en buena medida, durante los siglos XIX y XX la actuación de las instituciones dedicadas a la preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural en toda Europa, las cuales han centrado gran parte de sus esfuerzos y de sus recursos presupuestarios en la elaboración de inventarios y registros lo más exhaustivos posibles en los que se refleje la riqueza de los testimonios del pasado de cada región o nación(...)* Constituían una mera descripción ordenada de una serie de bienes que se individualizaban y cuyas características se debían fijar al máximo no tanto para facilitar la acción protectora como para servir de instrumento de conocimiento y consulta. La actividad de catalogación servía para individualizar los bienes susceptibles de ser protegido por razón de arte o de historia, pero no predisponía las medidas protectoras que les resultaban aplicables, precisamente porque la actividad de catalogación no llevaba asociada un régimen jurídico protector propio(...) no aportaba nada desde el punto de vista jurídico, sólo una mayor publicidad material (...) No puede hablarse con propiedad, pues, de verdaderos instrumentos con eficacia

---

clasificar básicamente en estos tres: los de enumeración, clasificación y categorización o conceptual. El método de enumeración tiene el inconveniente de la dificultad de proceder a una determinación completa de las obras de arte o de los bienes culturales, y el riesgo de olvidarse siempre de algún tipo de bien o producto. El método de clasificación es aquel que comprende en la protección de la Ley sólo aquellos bienes que han sido objeto de una decisión específica de la autoridad competente. Los objetos no clasificados no tienen ninguna protección (...) El método más usado es el tercero, que consiste en una descripción genéricas de los objetos a los que la Ley se refiere y permite comprender categorías de los bienes por su valor e interés<sup>1404</sup>. Fue sin duda el criterio de identificación el que va a primar sobre todos los demás en el ordenamiento jurídico del Estado Liberal.

<sup>1405</sup> ALONSO IBÁÑEZ, M<sup>a</sup> del Rosario, *El Patrimonio Histórico. Destino público y valor cultural*. Universidad de Oviedo, pp.142-143.

*vinculante. La actuación administrativa catalogadora del Patrimonio cultural inmueble, en la legislación histórica del siglo pasado, no ha dejado de ser un intento, -poco afortunado, por cierto-, de inventariar determinadas riquezas, actuación que, eso sí, va unida de modo incesante a un deseo de conservación, de evitar la pérdida o desaparición de bienes históricos, deseo que no alcanzó a instrumentalizarse de forma más potente puesto que nunca, llegaron a tener un valor real al margen de la declaración formal de un bien como Monumento Histórico-Artístico, sino meros efectos internos<sup>1406</sup>.*

Aquellos bienes históricos-artísticos que se identificaran como bienes tutelados por el Estado serían insertados en un Catálogo o Inventario, que se convertirían en meros instrumentos administrativos de selección patrimonial en el ámbito jurisdiccional. En su origen, los catálogos fueron simplemente inventarios manuscritos, carentes de cualquier tipo de ilustración, cuya práctica se extendió a los museos o las propias exposiciones públicas. A mediados del siglo XVIII, en 1752-1754, se publicaría el catálogo de los cuadros pertenecientes a la Corona de Francia, que sería redactado por el pintor y escritor Lepicié, a la que le siguieron los catálogos de las instituciones museísticas que nacerían a lo largo de estos años, como las del Museo Vaticano y la Galería de Mantua, de finales del siglo XVIII, a la que se debe añadir la realizada en 1793 en el Museo del Louvre, en el entonces denominado Museo de los Monumentos Franceses, redactado por Alexander Lenoir. La judicialización de la catalogación e inventariado de los bienes histórico-artísticos será uno de los campos de batalla a la hora de definirlos como bienes de interés público.

***- La configuración jurídica de la Restauración Inmobiliaria: el deber de conservación del propietario privado de los inmuebles históricos.***

En el desarrollo de la historia del arte se ha debatido ampliamente en torno al concepto de restauración y de conservación de los bienes históricos-artísticos, sin que en ningún momento haya quedado plenamente definido en que consiste esta actuación, por lo que ya desde el plano metajurídico nos encontramos con una actividad no definida plenamente que se querrá dotar de un contenido jurídico<sup>1407</sup>. Un problema añadido será el hecho de que no se

<sup>1406</sup> ALONSO IBAÑEZ, M<sup>a</sup> Rosario, “Los Catálogos Urbanísticos y otros Catálogos protectores del Patrimonio Cultural Inmueble”. *Rue y Monografía Monografía asociada a Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación*. Navarra, 2005. Número 11, p.34.

<sup>1407</sup> Desde un ámbito metajurídico se puede recoger como síntesis el análisis realizado por Javier Rivera sobre el concepto de restauración: *El propio término de restauración es mutante y ambiguo, pues sus significados varían substancialmente desde la posición que se adopte. Sin embargo, será preciso señalar el origen de la palabra, del latín renovar, restablecer, reavivar, es decir, actuar innovando para revitalizar el objeto actuado. Desde este valor de los orígenes del vocablo hasta el que adquiere en los años finales del siglo XX se ha producido una rica y compleja evolución del término y de los significados del concepto (...) Desde el Imperio romano hasta mediados del siglo XVIII restaurar una obra de arquitectura, significaba, generalmente, actuar de forma innovadora en la misma según la diversa valoración que cada tiempo tenía del monumento (...).*



configuraría hasta el siglo XIX una verdadera disciplina autónoma y científica que se le designase con la denominación genérica de restauración, de la que saldrían múltiples escuelas contrapuestas por lo que no se puede hablar de una intervención coherente<sup>1408</sup>. Conservación y restauración del inmueble, dos conceptos que se contraponen y que no se han puesto en su sentido semántico en la doctrina jurídica, por el que recogemos Valle Galván defiende que ambos conceptos son equivalentes en su sentido amplio, mientras que para Nieto Pérez considera que la conservación no es sino una de las dos fases o etapas principales que conforman la restauración, por lo que el término restauración incluiría una primera fase de conservación y una segunda de rehabilitación. En la doctrina internacional se ha ido incluyendo algunos resultados doctrinales como en la que se plasma en la Carta de Venecia de 1964 sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos en el que se inserta en su artículo 9º que la restauración es una operación con carácter excepcional, teniendo como fin conservar los valores estéticos e históricos del monumento, fundamentándose en el respeto a la esencia antigua y a los documentos antiguos, teniendo su límite allí donde comienza el terreno de la hipótesis. La Carta de Restauro de Brandi es esencial a la hora de introducirnos en la cuestión a delimitar. En las conclusiones de las Actas de las Jornadas sobre Patrimonio Histórico-Artístico de Castilla y León de 1980 se deduce que la conservación sería el tratamiento técnico por el que se tiende a prolongar la vida del inmueble, mientras que la restauración se trataría de un proceso destinado a la reintegración de la imagen.

A raíz de la poca consistencia del sentido metajurídico de la teoría de la restauración y sus controversias con el sentido semántico del de conservación, lleva a la prácticamente inexistente fórmula legal específica del tema que como apunta J. Sánchez Mesa la paraliza la necesidad de no petrificar un concepto en constante evolución. De ahí que su judicialización nazca en el ámbito del Estado Liberal como un procedimiento de limitación de disposición y uso

---

Cabe hacer mención de la distinción que plantea Alejandro Bermúdez entre Conservación y Restauración: *En ocasiones se utilizan de manera indistinta o de manera incorrecta, cuando en realidad su significado y, llegado el caso, la utilización de una u otra modalidad cambiarían el resultado final de una actuación que se efectúe sobre un bien cultural. La conservación y la restauración son acciones sobre la estructura material del bien o su entorno, sea con carácter preventivo o con objeto de recuperación o reintegración (...) La restauración es un término que en sí mismo puede dotarse de significados distintos, o mejor que distintos, no plenamente coincidentes. La idea de restauración va unida a la de recuperación, a devolver algo perdido a un bien cultural, algo que tuvo, pero que se perdió (...) Distinto es plantear que pueda tener la restauración de un bien cultural, o hasta dónde puede llegar la reintegración, la reposición o, llegado el caso, la recomposición de partes perdidas (...) En la restauración, como en la conservación, no se acepta ni mucho menos, el todo vale o la arbitrariedad, sino que deben respetarse unas pautas para beneficio del patrimonio cultural y del valor e interés social que lleva implícito.* BERMÚDEZ, Alejandro, VIANEY M. ARBELOA, Joan; GIRALT, Adelina, Intervención en el Patrimonio Cultural. Creación y gestión de proyectos. Madrid, 2004, pp.46-47.

<sup>1408</sup> González-Vara Ibañez denomina al periodo anterior al siglo XIX como prehistoria de la restauración artística. GONZÁLEZ-VARA IBÁÑEZ, Conservación de Bienes Culturales

sobre el bien inmueble por parte del propietario. La conservación de los inmuebles Históricos se judicializa en el momento en que se ponen en cuestión el deber que tiene todo propietario privado o institución pública de mantener la esencia física del edificio en cuestión, en la que nuevamente entra a resurgir el problema de fondo que simboliza el derecho de la propiedad privada y sus posibles controversias con los intereses generales. La restauración del inmueble histórico puede ser un caso paradigmático de esta contraposición de intereses en el momento en que el propietario privado tiene un margen de potestad de disposición y gozo sobre la cosa u objeto a proteger al poder transformar en su esencia el inmueble, perdiendo el sentido original que el edificio tuvo en el momento de su construcción, y hasta que punto el Estado intervendría a la hora de ser restaurado un bien inmueble.

La intervención administrativa en la actividad de la restauración confluyen medidas que, en función del cariz que adquiere la naturaleza de la intervención puesta en práctica en la efectiva aplicación de las mismas, resultan reconducibles en esencia a dos clases: medidas que implican una intervención de limitación de derechos o facultades y medidas que impulsan una acción administrativa tendente a estimular y fomentar la práctica de la actividad restauradora, dentro de unos parámetros establecidos. La primera da lugar a un régimen jurídico-administrativo de la restauración como régimen de limitación, por lo que en el goce, disfrute y disposición de los bienes, resulta cotidiana las pretensiones de los particulares con los intereses público presente en su efectiva conservación y en el respeto a sus valores, por lo que el régimen dispuesto va encaminado a habilitar a la Administración para limitar al propietario, poseedor o detentor del bien patrimonial en sus actuaciones sobre el mismo. Este modelo se convierte en la clásica técnica de policía, la llamada tutela negativa del bien a proteger. El segundo, da lugar al régimen jurídico de la restauración como un régimen de fomento, que estimula la labor del propietario y al mismo tiempo regulariza una acción de la Administración más favorable a la cooperación en la actitud conservadora y restauradora del bien inmueble que se quiere proteger<sup>1409</sup>.

Sería en el Estado Liberal cuando se produce en cierta medida un germen del derecho urbanístico propiamente dicho, en cuya regulación inicial se va a ir trazando los derechos y deberes de los propietarios inmobiliarios así como la propia intervención administrativa. Sería en los estatutos municipales donde mejor se vislumbra la incorporación de los principios de salubridad o higiene, ornato público o seguridad a la hora de obligar al propietario a rehabilitar o conservar su inmueble histórico, por lo que las instituciones municipales paulatinamente en aras a la defensa de los intereses generales irá

<sup>1409</sup> SANCHEZ MESA, Leonardo La restauración inmobiliaria en la regulación del patrimonio histórico *Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación*. Núm. 10, Thomson, Aranzadi, 2004, pp.308-310.

obligando al propietario las medidas que debe adoptar en sus propiedades urbanas. Así durante el Depotismo Ilustrado, será el principio de ornato público lo que prima en la acción administrativa en función del bien común, a lo que se ira uniendo en el Estado Liberal los principios de higiene y seguridad. A pesar de ellos las medidas adoptadas en la práctica por las instituciones administrativas fueron muy limitadas y en la mayoría de los casos los propietarios privados se vieron libres a la hora de disponer de su inmueble. La carencia de unas técnicas de fomento por parte de la administración que estimulase la acción de los propietarios en su conservación, la falta de una verdadera concienciación del valor histórico del inmueble, y la amplia práctica de la especulación generada por el ilimitado expansionismo urbanístico, incluso desde la propia Administración completaron este panorama

La intervención administrativa contará con un mayor margen en el ámbito de la restauración y conservación de aquellos bienes inmuebles que habían pertenecido a la Iglesia y a la Monarquía y habrían entrado a formar parte del llamado Patrimonio Nacional, así como aquellos bienes inmuebles históricos-artísticos que aunque no tuviese la propiedad serían tutelados por el Estado. De esta manera sería diseñado un plan de protección por el Estado, en la que se insertaba su conservación y restauración para aquellos bienes inmuebles (las catedrales, las iglesias, los antiguos conventos desamortizados, los palacios reales, entre otros) que se consideraban dignos de tutela pública, independiente de su régimen jurídico de propiedad. Alibardi resume perfectamente cual es el sentido de la restauración inmobiliaria en el ámbito jurídico contemporáneo: *La modificazione o restauro copre ogni altra ipotesi in cui la cosa (...) viene a perdere una delle sue condizioni materiali originarie assumendo un diverso aspetto o una diversa consistenza. Per restauro si intende invece una attività diretta anch'essa a provocare una modificazione fisica della cosa, ma allo scopo specifico di migliorarne la condizione e di restituirlo al suo stato originario, L'attività di restauro è di preminente interesse pubblico ai fini della conservazione del patrimonio artistico, in considerazione dei complessi problema scientifici e tecnici che suscita; in essa lo Stato interviene sia per promuovere la ricerca sia per sovrintendere alla esecuzione dei lavori di speciale complessità. Il proprietario privato non può perciò dar corso di sua iniziativa al restauro della cosa d'arte, se esso non viene giudicato opportuno e comunque solo con le modalità e le cautele che l'amministrazione ritiene di prescrivere*<sup>1410</sup>.

<b>Evolución ideológica de las Ciencias de la Restauración</b>	Escuelas Teóricas de la Restauración de Inmuebles Históricos-Artísticos.
<b>2 ½ mitad del siglo XIX</b>	La Restauración Stylistique. Teorías de Viollet-Le-Duc; Manifiesto de León XIII.

---

<sup>1410</sup> ALLIBRANDI Y FERRI, *I Beni Culturali e Ambientale*, GiuffrèEditore., 1985, p.303.

<b>Últimos decenios del siglo XIX y principio del siglo XX.</b>	Anti.Restoration Movement. Teorías de John Ruskin y William Morris.
<b>Últimas décadas del siglo XIX</b>	La Restauro storico. Lucas Beltrami
<b>Finales del siglo XIX</b>	El Restauro Moderno. Camilo Boito III. Congreso de Arquitectos e ingenieros Civiles en Roma (1883)
<b>Primera Mitad del siglo XX</b>	El Restauro Scintifico. Teorías de Gustavo Giovannimi: La restauro italiana. La Carta de Atenas (1931)

Martinez Justicia ha ido delimitando su concepcion evolutiva desde el siglo XVIII en la que se resalta como las consideraciones estilísticas e históricas han sido predominantes en las actuaciones realizadas, subordinándose la arquitectura práctica. Una primera etapa correspondería a la llamada etapa neoclásica, desarrollada en la primera mitad del siglo XIX, cuyo objetivo primordial sería la de recomponer el edificio valiéndose de las partes originales o de su reproducción. Entre 1830 y 1870 se produce la contraposición de dos teorías plenamente desarrollada: la llamada restauración estilística, promovida por Viollet-le-Duc, basado en la reconstrucción total del edificio, a través de la analogía constructiva, incluso integrando elementos que no habían existido en un primer momento, frente a la restauración romantica defendida por John Ruskin, que se mostraría partidario de la intocabilidad de la arquitectura histórica. Posteriormente, entre 1880 y 1890 iría surgiendo una nueva aportacion primordial la llamada restauración histórica, representada por Camillo Boito, en la que defendía que había que conservar como fuera el aspecto pintoresco y artístico del bien a restaurar, teoría que sería posteriormente recogida en la Conferencia Internacional de Atenas de 1931, que pondría las bases definitivas de la teoría científica de la restauración. Desde el proceso revolucionario liberal va a ir abriéndose paso una cuestion primordial a la hora de tutelar el patrimonio monumental adquirido por el Estado, ya que las autoridades políticas y administrativas tendrán que deliberar, cuales edificios serán los conservables, y sobre todo como conservarlos, por lo que irá surgiendo un debate sobre la utilidad pública de estos inmuebles y su mantenimiento, en este caso el problema de la restauración. En este último campo se abre un capítulo de intervencionismo estatal que van a limitar la actuación libre de los arquitectos y de las instituciones implicadas en los proyectos restauradores de los edificios históricos, pues debido al interés público de su actuación deberá ser sancionados por el propio Estado.

El debate teórico que se va ir delimitando sobre el concepto de la restauración monumental entre los distintos arquitectos del momento iba a tener su impronta en el ámbito legislativo, generando un verdadero debate político, pero que en suma iba a significar la verdadera legitimación pública

sobre el Patrimonio Monumental, en principio exclusivamente sobre los inmuebles públicos, pero que después se extenderían sobre edificios pertenecientes a particulares, especialmente a los pertenecientes a la Iglesia. Los arquitectos-restauradores poco a poco fueron abordando una tendencia conocida como unidad de estilo, impregnados de las corrientes historicistas que estaban surgiendo en estos años. Un claro precedente lo va a representar el restauro arqueológico, que se formularía en Roma, durante el primer tercio del siglo XIX, por los trabajos realizados por arquitectos como Stern, Valadier, Camporesi, etc, entendiéndose como tal la operación realizada para completar o consolidar los edificios, una vez estudiados científicamente, excavados y dibujados correctamente, para obtener la recomposición del monumento mediante el empleo de partes originales o no poniendo en substancial diferencia sus reproducciones. Sería en los Estados Vaticanos donde se iría a poner en práctica esta metodología y tomaría forma jurídica, como podemos apreciar en la orden dada por León XIII en la que sancionó los criterios que debía utilizarse al ordenar la reconstrucción de la basílica de San Pedro: Ninguna innovación debe introducirse ni en las formas ni en las proporciones, ni en los ornamentos de los edificios resultante, si no es para excluir aquellos elementos que en un tiempo posterior a su construcción fueron introducidos por capricho de la época siguiente. Como señala Javier Rivera, *esta importante declaración formula dos principios o conceptos fundamentales de la forma de entender en aquel momento la restauración monumental. Por un lado plantea la imposibilidad de efectuar operaciones configuradoras o creadoras, no solo en los edificios, sino también en ruinas arqueológicas. Y por otro lado manifiesta que los monumentos son concebidos y considerados como unidades completas, esto es, perfectas e inmutables, a los que debe aplicarse la conservación que puede llegar por la misma causa de la protección a demoler los añadidos de otros tiempos, los cuales son arbitrarios*<sup>1411</sup>. En Francia, por el contrario fueron asumiendo primordialmente la llamada Restauration Stylique, encabezada por las teorías de Viollet-Le-Duc y asimilada desde el poder político, con la configuración de una verdadera institucionalización administrativa en la práctica restauradora. Con la Restauración de la Monarquía comienza una campaña de rehabilitación de monumentos, produciéndose un intenso debate institucional en la manera de restaurar estos edificios, que incluso como señala Rivera presenta algunas contradicciones, como en el caso del inspector de edificios, Ludovico Vitet, que en 1830 señalaría que *no se debe permitir la corrección de la irregularidad, ni de las desviaciones, porque la irregularidad, las desviaciones y los defectos de simetría son hechos históricos llenos de interés, los cuales a menudo constituyen los criterios arqueológicos para verificar una época, una escuela o una idea simbólica, aunque por otro lado, con tintes contradictorios, señala que el arquitecto necesita conocer todos los procedimientos del arte y la historia del arte, de modo que sea capaz de reconstruir un edificio a partir de los restos de éste, y no por hipótesis o*

---

<sup>1411</sup> RIVERA, Javier "Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. Conceptos teoría e Historia" en FERNANDEZ ALBA, Antonio *Teoría e Historia de la Restauración*, marzo, 1997, p.114.

*capricho, sino por medio de una severa inducción.* En realidad, Villet contemplaba la restauración como una operación de integración estilística por medio de la cual el arquitecto debería tender a alcanzar en el monumento la unidad que coincidiera con su estado primitivo. Una de las grandes controversias que se dieron en este momento y que llegaría a la misma Cámara de los Diputados franceses sería la restauración de la Catedral de Notre-dame, al defender Malerville, *quesustituir una piedra que cede con una piedra que resiste, murar de nuevo una pared que el tiempo ha desecho, reerigir una aguja que se cae, reinformar una ventana que se abarca, reproducir la ornamentación mutilada, no es profanar el monumento, es hacerlo revivir.* La defensa de la perpetuidad del edificio como actuación administrativa iba a marcar toda la política de restauración del Patrimonio Monumental en Francia, en la que se estaba poniendo en énfasis la identidad del inmueble a rescatar no por la antigüedad de sus materiales, sino por la personalidad de su propia forma y estructura.

***- La intervención de la Administración en el ámbito urbanístico: el triunfo del espacio público burgués.***

Con la llegada del Estado Liberal se va a producir una nueva realidad en el ámbito de la historia del urbanismo: la aparición del espacio público como lugar de expansión de los intereses de una burguesía, que con el proceso industrializador y la llegada del impacto de la revolución de los transportes van a cambiar el perfil morfológico de la urbe<sup>1412</sup>. Sin embargo, al mismo tiempo en estas transformaciones se ha ido definiendo un nuevo trasfondo ideológico de interés social burgués que ha ido sustituyendo a los que anteriormente habían modelado las clases preponderantes del Antiguo Régimen. La protección de la estética urbana por parte de los poderes públicos se convierte en la verdadera precursora en el ámbito del derecho urbanístico en relación a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico<sup>1413</sup>. Lo estético en el

<sup>1412</sup> El espacio público es un término polisémico, que a la hora de establecer su naturaleza jurídica, en principio existe un acuerdo doctrinal, al definirlos como aquellos espacios de usos y dominio colectivo, contraponiéndose a los espacios de propiedad privada, ya sean abiertos o edificados BORJA, Jordi Ciudadanía y espacio público en Foro la Ciudad Humanizada 2002. Cultura Urbana y Cultura Medioambiental. Sevilla, Signatura, 2003, pp.103-122.

<sup>1413</sup> Álvarez Mora puntualiza la incapacidad que tuvo la sociedad estamental del Antiguo Régimen a la hora de transformar la ciudad: *Las pautas constructivas que se dan y que caracterizan a la sociedad del siglo XVII-XVIII (...) podemos resumirlas en los siguientes aspectos: 1. Intervenir en la ciudad no significa, necesariamente, proceder a transformarla, es decir modificar su comportamiento espacial (...) Dichas intervenciones, cuando se producen, tienen casi exclusivamente, una incidencia puntual (...). Y ello es así no sólo porque la sociedad dieciochesca no dispone de los medios, ni de la voluntad, para transformar el espacio urbano heredado (...) sino también por cuanto aún no se ha pensado, desde el plano teórico, la necesidad de tal transformación (...) Esta incapacidad de proceder a la transformación total de la ciudad se ha manifestado en la medida en que dichas transformaciones urbanas se estaban planteando desde la práctica arquitectónica (...) Intervenir en la ciudad significa, en este momento, materializar actuaciones llevadas de la mano de la práctica arquitectónica (...) por lo que resulta incapaz de plantear una alternativa global a la ciudad existente (...).* ALVAREZ MORA, Alfonso La necesaria componente



ámbito urbano como actitud de embellecimiento de sus edificios y planificación se convierte en un objetivo primordial con un sentido de prestigio social, destacándose el nivel cultural de una ciudad en función al embellecimiento en que se encontraba la estructura de la urbe. Son muy aclaratorias las reflexiones de Álvarez Mora sobre las normas de la estética urbana y su función de poder social: *Hacer ciudad y hacer arquitectura en este sentido se confunden, pero ello es entendible en unos siglos (sobre todo el XVIII) en los que intervenir en la ciudad se consideraba como una práctica tendente a exaltar las virtudes de un poder absoluto. Sólo interesaba, en este sentido, lo que propaga la virtud del poder, lo que afirma la bondad de las instituciones. La ciudad está al servicio de la ideología dominante, y la arquitectura se configura, de esta manera, como su instrumento más eficaz. Los espacios sociales se justifican materializados a través de una práctica urbanística muy concreta: nos referimos al ornato y embellecimiento, práctica que solo entiende de la decoración de determinados ambientes urbanos*<sup>1414</sup>. Lo estético urbano adquiere un sentido jurídico en el momento en que se inserta en la normativa urbanística, estableciéndose la manera en que tiene que estar embellecidos los inmuebles. La protección de la estética urbana generará una vez más un conflicto de intereses entre las pretensiones de la Administración por establecer los cánones del embellecimiento de una ciudad y los intereses privados, convirtiéndose en un campo de batalla en el marco del derecho urbanístico. El profesor Murga Gener al referirse a la propiedad urbana ya precisaba como en el Derecho Romano se limitó el derecho de propiedad –sobre todo en cuanto al *ius disponendi* y el *ius tollendi*- al establecer una serie de prescripciones en el que se establecía las prohibiciones de disponer de elementos ornamentales de las fachadas al fin de evitar el empobrecimiento del ámbito-estético triunfal de la urbe<sup>1415</sup>. Sería en la etapa del absolutismo francés cuando se puede afirmar que la ciudad llegó a ser un fenómeno esencialmente estético, por lo que la estética se convierte en la guía esencial de las acciones urbanísticas, surgiendo una amplia normativa en la que se el *embellissement* se convertiría en la base de las acciones urbanísticas. Es el momento en que proliferarán una exhaustiva reglamentación acerca de cómo tenía que ser el inmueble, los materiales de construcción, etc.

---

espacial en la Historia Urbana en SAMBRICIO, CARLOS, ed. *La Historia Urbana*, Ayer, 23, 1996, pp.43-46

<sup>1414</sup> ALVAREZ MORA, 1996, p.44.

<sup>1415</sup> *El ascendiente de la ideología helenística antigua, recibida en tiempos republicanos, y potenciada al máximo en tiempos imperiales, fue probablemente la que determinó la valoración preeminente de la ornamentación externa y de las fachadas. Los monumentos públicos, los templos de los dioses, las construcciones conmemorativas y las casas particulares fueron concebidas todos, como obedeciendo a unas líneas generales y siempre sus motivos decorativos aparecen pensados en función del lugar que deben ocupar (...)* Para evitar el deterioro estético se establecieron limitaciones a la facultad de disposición, por lo que se prohibía la compra de domus para conseguir un lucro con los despojos. MURGA GENER, J. L. Protección de la estética en la Legislación Urbanística del Alto Imperio, *Anales de la Universidad Hispalense*, Serie Derecho, n. 28, 1976, p.79. También se puede consultar VARELA MATEOS, E. *El grave problema de la conservación de los edificios privados en la Roma clásica*, en Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, Madrid, 1988, pp.847-859.

Se ha definido el triunfo del espacio regio de carácter absolutista frente al concepto de espacio privado<sup>1416</sup>. Esta concepción va a ser heredada por la burguesía liberal, en cuyos planeamientos urbanísticos se va a ir definiendo una revisión de los principios estéticos urbanos en bien del buen uso del ornato. Sthendal señala como existía una comisión de ornato en la ciudad de Milán que imponía el gusto estético que debía de predominar en las fachadas de las casas, incluso de los propietarios: *Hay aquí una comisión de ornato: cuatro o cinco ciudadanos señalado por su amor por las bellas artes y dos arquitectos componen esta comisión, que ejerce sus funciones gratuitamente. Cada vez que un propietario todo el mundo frontal de su casa, está obligado a comunicar su plan a la municipalidad, que lo transmite a la comisión di ornato. Ésta da su opinión (...)*<sup>1417</sup>. El programa de embellecimiento urbano decaería con la llegada de la concepción utilitarista de la ciudad con el advenimiento de las vanguardias, el advenimiento de la cultura de masa, y el auge de lo económico en detrimento de la estética y de lo cultural<sup>1418</sup>. Las ordenanzas locales serían los instrumentos normativos primordiales a la hora de configurar una estética jurídica en el embellecimiento urbano. Un gran número de estas estarían fundamentadas en las prescripciones estilísticas defendidas por las Academias de Bellas Artes. En 1893 se publicó un libro del alcalde de Bruselas, *Esthétique des Villes*, muy popular en la época donde se establecía como debía de ser embellecida las ciudades, especialmente los inmuebles que lo formaban el

<sup>1416</sup> La significación política del espacio regio propio del absolutismo monárquico está recogido en los términos de Álvarez Mora: *Estos espacios decorados se inscriben, por otro lado, en la concepción de un modelo urbano (...) donde se está actuando en el espacio público con la intención de dirigir y controlar su uso comunitario, concibiéndose dicho uso como extensiones de lo privado (...) Se trata de una forma de entender la ciudad como coto privada propiamente dicha como de aquella otra, que en un principio es de dominio público. La ciudad, del mismo modo que sucedía durante la Edad Media, se va privatizando, convirtiéndose al final en una yuxtaposición espacial de entidades territoriales identificadas con grandes familias de propietarios. Esta privatización a lo que se ve sometido el espacio urbano se desarrolla en el marco de una concepción urbanística caracterizada por la idea de aglutinar componentes sagrados y aristocráticos que desarrollan, en su relación con el espacio urbano, conjuntos unitarios (...). El espacio urbano es proyectado, según esta lógica, con fines privados. La Corte sale de los palacios para implantarse y apropiarse de la ciudad (...) Y para lograr esta unidad urbanística que haga posible una visión, también unitaria, del artefacto urbano apropiado como asiento de una concepción absolutista del Estado, que mejores instrumentos técnicos que las llamadas servidumbres especiales de arquitectura. Se trata, en esencia, de ordenanzas figurativas que se establecen para aquellos sectores urbanos donde se ha producido ese fenómeno de apropiación del espacio público. Las ordenanzas figurativas ejercen como formas compositivas a las que deben someterse todas las edificaciones que se lleven a cabo en el sector urbano correspondiente*

<sup>1417</sup> STENDHAL, *Roma, Nápoles y Florencia*, Valencia, Pretextos, 1817/1999, p.44.

<sup>1418</sup> Un interesante resumen sobre la impronta de la regulación jurídica de la estética en las ciudades del Antiguo Régimen: GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago, Régimen jurídico de la estética en el Derecho Urbanístico, *Patrimonio Cultural y Derecho*, 3, 1999, pp.87-93; Sobre la evolución de la estética en la legislación del patrimonio histórico-artístico y urbanístico a lo largo del siglo XX cabe mencionar MORAND J.-DEVILLER, *Esthétique et droit de l'urbanisme Mélangés René Chapus*, París, 1992.

entramado urbano. Sin embargo, en otras áreas culturales como fue el caso de USA en un principio se opusieron a la implantación de una normativa estética en las ciudades, no siendo hasta los años treinta cuando se comenzó a tener en cuenta como base de la regulación derivada del poder de policía<sup>1419</sup>.

La utilidad pública como eje del ordenamiento urbanístico propia de la revolución industrial va a sustituir la concepción esteticista de la ciudad barroca, teniendo su implicación específica en el tejido urbano de carácter histórico. La nueva ciudad utilitarista irá sustituyendo a la ciudad histórica, al mismo tiempo que irá configurándose un nuevo concepto de espacio público que elimine los vestigios de los espacios históricos en su mayoría pertenecientes a las antiguas clases dominantes del Antiguo Régimen<sup>1420</sup>. El carácter público de la nueva ciudad liberal va a producir amplias transformaciones en el ámbito morfológico. En la Europa de los años centrales del siglo se asiste a una verdadera revolución de los planteamientos urbanísticos, que en realidad no se había dado en muchos casos desde la etapa medieval, con algunas excepciones en las etapas del Renacimiento y del Barroco. Las verdaderas razones que impulsaría esta transformación sería la

---

<sup>1419</sup> En relación a este hecho, Edward Ziegler *Las primeras decisiones judiciales sostuvieron que la regulación de aspectos estético violaban el proceso debido, ya que los mismos no eran considerados un fin de interés general legítimo para imponer una opinión pública de la belleza visual a los ciudadanos, y porque la normativa estética se consideraba intrínsecamente arbitraria y caprichosa (al estar el concepto de belleza exclusivamente en el ojo del observador) (...) La regulación de los aspectos estéticos fue vista como un intento de asegurar beneficios para la sociedad distintos a la prevención del daño a la salud, a la seguridad, a la moral o al bienestar general (...) Ya en los años treinta, los tribunales iniciaron un giro hacia la aceptación de lo estético como base de la regulación derivada del poder de la policía (...) Aunque los tribunales continuaron refiriéndose a la subjetividad intrínseca de la estética como base normativa (...) prácticamente todos los estados acabaron secundando la doctrina (...)*. ZIEGLER, Edward H. "Belleza visual, Estética y Diseño en el derecho urbanístico de los Estados Unidos" *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, Enero-Febrero, 1999, 167, pp.81-87.

<sup>1420</sup> ALVAREZ MORA, Alfonso La necesaria componente espacial en la Historia Urbana en SAMBRICIO, CARLOS, ed. *La Historia Urbana*, Ayer, 23, 1996, p.35. *La burguesía, al contrario que la aristocracia que le ha precedido, más preocupada por decorar la ciudad, hace de las intervenciones urbanísticas unas operaciones de utilidad pública, ya sea porque es heredera de una causa revolucionaria que se ha propuesto acabar con privilegios aristocráticos, o porque, y esto es quizás lo más probable, ha mostrado una decidida voluntad de incorporar el espacio urbano al aparato productivo (...) Establecidas las pautas que hacen de la ciudad, del espacio urbano, un objeto físico sometido a reglas estrictas de producción, se impone una manera de entender su desarrollo, o su reproducción, en clave demolición-edificación (...) Se va a ir decantando en el marco de un dilatado debate a propósito de las posiciones a adoptar frente a la conservación o no de lo que se suele denominar Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Conservación que va a estar condicionada por lo que en cada momento histórico se entienda, conceptualmente hablando, por patrimonio (...) En un primer momento, la idea del patrimonio aparece muy estrechamente relacionada con valores eternos que reclaman lo histórico y artístico como únicas reservas culturales a preservar. Sólo se consideran objetos de recuperación y, por tanto, de intervención y proyecto, aquellas piezas arquitectónicas que poseían una calidad suficiente como para gozar de un reconocimiento universal, más allá del específico contexto social al que debían su razón de ser (...)*.

apuesta por la modernización del tejido urbano, fundamentado en cuatro pilares definidos: 1º) Higiénicas, que en este momento la vieja ciudad histórica no contaba con ningún tipo de previsión sanitario, por lo que será especialmente importante la presencia de ingenieros sanitarios y la promulgación de la Ley francesa de 13 de abril de 1850, verdadero precedente que sería posteriormente repetidas en leyes análogas, como la italiana de expropiación de 25 de junio de 1865 y la belga de 15 de noviembre de 1867; 2º) Técnicas: necesidad de dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras de comunicaciones, para lo que se abriría avenidas amplias para la circulación interior de la ciudad y la creación del transporte urbano; 3º) Estéticos: por lo que aplicaba el principio del decoro urbano, siguiendo la tipología de configurar bloques uniformes, con las alineaciones de las calles en trazados rectilíneos y la creación de grandes avenidas arboladas para abrir la perspectiva visual a las vías urbanas y 4º) Especulativas: relacionada con los intereses de los propietarios y la industria inmobiliaria que había naciendo en estos años. La delineación de la nueva ciudad burguesa va a dar lugar a la confección de un derecho urbanístico donde primará los intereses del nuevo estado burgués que se contrapondrá con los de lo privado. Dos actuaciones primordiales por parte de la intervención administrativa van a quedar en entredicho como protector de un bien de interés histórico-artístico: La destrucción de la muralla que rodea la antigua ciudad y el derribo de barrios de interés histórico y artístico, que en algunos casos incluso tendrá que tropezar con el interés privado de la propiedad.

La muralla se considera cosa sagrada en los *Instituta* de Justiniano: *Las murallas y las puertas, están hasta cierto punto sometido al derecho divino (...) decimos que las murallas son sagradas, pues se declara la pena capital contra los que comentan cualquier ofensa contra ellas.* Las murallas habían tenido en realidad especialmente un significado militar, la defensa de la ciudad y nunca se habían considerado como elemento de recreación estética, por lo que en los albores de la industrialización y en una época de renovación de la maquinaria bélica, había perdido su utilidad práctica. En la etapa isabelina la mayoría de las cercas amuralladas habían perdido todo su funcionalidad, ya que desde los comienzos de la Edad Moderna, no se habían construidos, ni en algunos casos se habían mantenido sus reparaciones, sola aquellas que se insertaban en aquellas ciudades que defendían costas y fronteras. Como apunta Francisco Quirós *la perdida de funcionalidad de las murallas medievales alcanzaba su grado más patético en aquellos casos en que el recinto amurallado, incómodo por su emplazamiento enriscado, había quedado prácticamente yermo, mientras una nueva población crecía a sus pies. Los muros, con frecuencias ruinosos, de la antigua villa ahora desierta, no encerraban otra cosa que una iglesia solitaria y, acaso, el cementerio*<sup>1421</sup>. La muralla, carente de utilidad, se encontraría desbordada por el crecimiento de

<sup>1421</sup> QUIROS LINARES, Francisco *Las ciudades españolas en el siglo XIX* Valladolid, 1991, p.57.

los arrabales que habían ido surgiendo desde la etapa medieval, que incluso aparecían embebidas en edificios empotradas sobre el lienzo. A ello se unían las puertas y pasadizos que en cierta manera impedían la circulación del tráfico mercantil<sup>1422</sup>.

Para Jacques Le Goff *el fenómeno del derribo de las murallas es, un fenómeno de desarrollo (...)*. Y es que podemos cuestionarnos en este sentido, que simbolizaba la muralla para las nuevas ciudades industriales que estaban naciendo en el ámbito hispano. La respuesta en una primera lectura nos lo da nuevamente el historiador francés: *Para las ciudades industriales, para las de explosión demográfica, las murallas se habían convertido, con frecuencia, en viejos armatostes. Y lo que es peor, constituían un obstáculo insuperable para la circulación*. La explosión demográfica va a generar en cierta manera unas *urgentes necesidades colectivas de espacio (...) en efecto, en el momento en que el organismo urbano empieza a crecer y a desarrollarse, la muralla se convierte en el símbolo de la constricción de la ciudad dentro de un límite físico estrecho, que es necesario abatir para que el desarrollo económico y demográfico puedan realizarse de modo adecuado*<sup>1423</sup>. Sin embargo además de una cuestión económica, subsistía un claro matiz simbólico: la muralla claramente significaba una frontera ideológica entre el mundo rural y el urbano, tenía un especial matiz de barrera psicológica, y su desaparición suponía la integración de amplias capas poblacionales que hasta este momento se habían quedado excluidas de la vida social de la ciudad. Desde la Edad Media, las murallas claramente habían manifestado externamente la supremacía de la ciudad, el carácter de defensa frente a las amenazas del exterior, concepción que se iría superando a medida que iba avanzando la industrialización. Además la muralla tenía un claro referente fiscal, ya que se había convertido en una verdadera aduana por donde a través de sus puertas tenían que ser pagado unas tasas por todo bien que quisieran introducirse en el interior de la ciudad. La muralla se convierte sin ninguna duda para las nuevas ciudades industriales en un verdadero obstáculo de expansión económica, por lo que como apunta Cesare de Seta *las ciudades se liberan de esa su coraza natural que son las murallas*<sup>1424</sup>. Los principios de la higiene y de la expansión urbana en aras a la comunicación fueron sustituyendo a los principios estéticos como delimitadores del derecho urbanístico. Santiago González-Vara enfatiza los nuevos problemas de la ciudad que van a dar paso a las nuevas técnicas de

---

<sup>1422</sup> Los datos proporcionados por Francisco Quirós son fehacientes: la muralla de Cuenca tenía seis puertas y tres postigos, estando destruidas en muchas partes y confundida con las casas; en Huesca, iban desapareciendo bajo las casas que se iban edificando sobre ella, y de sus 99 torres solo quedaban dos; las murallas de Jaén, aunque ofrecía aún trozos bien conservados, estaba en buena parte embebida en las casas y muchas de sus puertas ya no existían. En Granada se conservaba el sector septentrional del recinto; Guadalajara no mantenía sino pequeños trozos suyos (...) (Cfr. QUIROS LINARES, F., 1991, p.58).

<sup>1423</sup> DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques *La ciudad y las murallas* Madrid, 1989.

<sup>1424</sup> DE SETA, Cesare *La ciudad europea del siglo XV al siglo XX*, Istmo, Madrid, 2002, p.124.



policía administrativa, al considerar una subordinación a los intereses económicos y a la satisfacción de las necesidades sociales<sup>1425</sup>.

**- La regulación del tráfico jurídico de los bienes muebles de carácter histórico-artístico.**

La regulación de la exportación y de la importación de los bienes histórico-artístico va a ser un exponente vital en el ámbito de la legislación del Patrimonio Histórico-Artístico en el Estado Liberal. La exportación generalmente es una actividad beneficiosa para todos los países desde el punto de vista económico y social, ya que no solamente es una fuente de ingresos, sino que también marca a quien lo realiza, atendiendo a la clase de bienes y al volumen de la misma dentro del concierto internacional. Sin embargo, con los bienes culturales el principio es al contrario, ya que su desposesión supone un perjuicio para la identidad colectiva, deja a la colectividad sin un bien insustituible, y es que los bienes culturales en principio no son bienes consumibles, son bienes escasos y que, salvo, excepciones no son generables. Un gran número de conflictos jurídicos entre las pretensiones de los propietarios privados y los intereses generales se van a ir produciendo a lo largo de esta etapa, donde se aprecia todavía la impronta del derecho privado en la configuración del derecho público. El fenómeno del expolio como factor desencadenante de la configuración del Estado Tutelar ha tenido su influencia en la configuración jurídica del tráfico de bienes culturales, especialmente regulando el régimen de exportación e importación de los mismos<sup>1426</sup>. Como apunta José María Magán *la historia de las exporaciones de bienes culturales discurre paralela a la historia de las guerras y conquista que los pueblos han librado entre ellos a través de los siglos. Las guerras exponen los bienes culturales a dos peligros principales: la destrucción por la acción militar y la expoliación por la práctica del botín. Las guerras, las colonizaciones y otras series de acontecimientos han generado un flujo de bienes culturales de unos países a otros que en multitud de ocasiones han ido mucho más allá de la salida de bienes aislados del territorio de sus Estados de origen, llegando a constituir verdaderas exportaciones masivas*<sup>1427</sup>. El

<sup>1425</sup> GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago *la rehabilitación urbanística*, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1998, pp.26-27. Lo que simplemente interesa destacar es el fenómeno de la subordinación de la ciudad a la satisfacción de las necesidades sociales (el problema de la vivienda) y económicas (el progreso industrial) no culturales. Sin que con todo ello quiera decirse que durante el siglo XIX y el XX no haya habido ocasión para la realización de valores de tipo cultural dentro de la ciudad, pues por ejemplo puede recordarse que durante el siglo XIX comienza con carácter sistemático la órbita restauradora de los bienes culturales, y las declaraciones históricas-artísticas de los monumentos (...).

<sup>1426</sup> MEYER, Karl *El saqueo del pasado: historia del tráfico internacional ilegal de obras de arte*, México, 1990.

<sup>1427</sup> MAGAN PERALES, José María *La circulación ilícita de los bienes culturales*. Editorial Lex Nova, 1º edición, julio 2001, p.62-63. Un amplio análisis sobre el fenómeno de la expoliación desde una perspectiva histórica nos lo proporciona HOLST, Sigrun: *Biens Culturels et relations internationales: Spoliations, protection, restitution*. Tesis Doctoral inédita. Fuentes Camacho apunta como al lado de las expoliaciones llevado a cabo por el Imperio Romano, las más significativas se producen desde finales del siglo XVIII como consecuencias de las campañas napoleónicas, el desmantelamiento del Panteón por Lord Elgin



mercado fraudulento que se va a ir produciendo a lo largo de toda la etapa liberal, producto no solamente de la expoliación de los procesos revolucionarios o conflictos internacionales, sino de la creación de verdaderas redes de mercancías de bienes va a producir una reacción con la configuración de toda una normativa en torno al derecho de exportación, aunque nuevamente nos encontramos con las trabas del derecho de la propiedad privada.

La exportación de los bienes quedará regulada en función de un interés común que se aprecia en todas las legislaciones del derecho comparado en el seno de la protección del Patrimonio Histórico-Artístico: La defensa del Bien Histórico-Artístico por parte del Estado que reconoce en su perfil los valores jurídicos insertados en el ordenamiento jurídico como son los intereses histórico, artístico e incluso culturales. En el Estado Liberal se partía del principio de libertad de enajenación, que iría limitándose con la configuración del sistema de catalogación e inventario, por lo que solo aquellos bienes que estuviesen jurídicamente reconocidos por un acto administrativo formal eran limitados la salida libre del país de origen, por lo que por el contrario aquellos bienes que no habían sido reconocido por la Administración digno de ser protegidos oficialmente por su valor histórico o artístico y que fuera propiedad de un sujeto privado podía ser exportado sin ningún tipo de trabas. Así prácticamente toda la normativa limitadora del derecho de exportación en la etapa liberal se centrará en la protección de los bienes catalogados. Luis Anguita Villanueva señala tres tipos de regímenes de exportación de bienes culturales: aquel que prohíbe totalmente la salida de los bienes catalogados al exterior, que se puede apreciar en aquellos países con un limitado aparato administrativo; otros donde se establezca un régimen de plena libertad de exportación sin ningún tipo de límites, y por último un punto intermedio, donde la libertad de exportación esté sometida a criterios administrativos, que lo recogerá la mayoría de los Estados Liberales<sup>1428</sup>. Una medida que quedará insertada en el seno del ordenamiento jurídico liberal del Patrimonio Monumental será el derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración, por el que el Estado se situaría en preferencia sobre otros propietarios particulares a la hora de adquirir un bien histórico-artístico, medida que podemos afirmar que fue muy usada desde el periodo del Despotismo Ilustrado<sup>1429</sup>. Al mismo tiempo se va a ir configurando se va a ir configurando

---

a comienzo del siglo XIX., Etc, FUENTES CAMACHO, Víctor *El tráfico ilícito internacional de bienes culturales (Perspectivas del Derecho Internacional Privado español)*, Ed. Beramat-Eurolex, Col. Estudios Internacionales, Madrid, 1993, pp.27-28.

<sup>1428</sup> ANGUITA VILLANUEVA, Luis. A. *El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural*, Madrid, Dikyon, 2006, pp.215-216.

<sup>1429</sup> El derecho de tanteo y retracto se considera derechos reales de adquisición preferente, y al mismo tiempo limitadores del dominio establecidos por razones de interés general. No vamos a entrar en este trabajo sobre las controversias doctrinales en torno a este derecho, considerando algunos autores que en el tanteo la preferencia tendrá lugar antes que la enajenación se consuma, mientras que en el retracto se desenvuelve en una enajenación realizada (BADENES GASSET, R y COCA PAYERAS, M.), mientras que existen otras opiniones como la de Feliu

una normativa sancionadora para aquellos sujetos privados que ocasionaron la salida de bienes catalogados sin la autorización pertinente, que iban desde una cuantía de multa hasta prisión. El Estado va a ir asumiendo el derecho de adquisición preferente en el caso de que un bien clasificado estuviese en propiedad de un sujeto privado. Al contrario que la exportación, la importación no va a estar regulada en ningún momento en el ordenamiento liberal<sup>1430</sup>, ya que era una práctica muy frecuente la adquisición de todo tipo de bienes histórico-artísticos bien por el propio Estado, que iban a engrosar las colecciones públicas de los incipientes museos que se habían ido generando en este momento, especialmente a raíz del colonialismo, y de los sujetos privados del coleccionismo, bien a instancia de un particular, bien de las instituciones privadas que habían ido naciendo en el seno del desarrollo científico.

*- La singular protección del patrimonio arqueológico.*

*- La protección pública del Patrimonio Arqueológico en el Estado Liberal..*

Sin duda alguna se trata del ámbito de protección jurídica más desarrollada de los llamados Patrimonios Especiales en el ámbito de la legislación del Estado Liberal, por lo que la intervención de la acción administrativa en este tipo de bienes se va a acentuar. Y es que el incremento del expolio del Patrimonio Arqueológico llevó a considerar al Estado medidas muy restrictivas de adquisición y uso, convirtiéndose en el verdadero campo de acción para la delimitación de una propiedad pública del Patrimonio Histórico-Artístico. Las excavaciones arqueológicas en un principio fueron objeto de una normativa muy precisa en cuanto al procedimiento administrativo que conllevaba. Sin embargo, no siempre fue así, y las condiciones de la Administración fue muy deficitaria al no contemplar suficientes medios para que pudiese ejecutar la normativa.

La regulación jurídica del Patrimonio Arqueológico en el Estado Liberal inicia el camino de la delimitación propio del régimen de propiedad de estos bienes, su demanialización, por el cual todos aquellos que fueran encontrados como consecuencias de excavaciones, remociones de tierra o por azar tenía que comunicarlo a la Administración, por lo que entraría a formar

---

Rey que se contrapone a esta teoría. En el ámbito del contexto jurídico del Estado Liberal, nos puede ayudar el criterio mantenido en la sentencia del 22 de noviembre de 1901, que declaró que la palabra tanteo comprendía tanto el tanteo propiamente dicho como el retracto (...). CARRACNCHO HERRERO, M<sup>a</sup> Teresa, *La circulación de bienes culturales muebles*, Universidad de Burgos, 2001, pp.74-76.

<sup>1430</sup> No debe de extrañar este hecho, ya que en el derecho del Patrimonio Cultural contemporáneo la importación no aparece regulada, tal como así lo señala Magan al considerar que *la rigidez que caracteriza a numerosas legislaciones en materia de exportación raramente se encuentra equilibrada por una actitud tan estricta en lo que concierne a las importaciones. La mayoría de países que han adaptados leyes de exportación muy severas, dejan que los bienes culturales que provienen del extranjero entren libremente* MAGAN, José M<sup>a</sup>, 2001, p.185.

parte del Dominio Público. Alonso Ibañez señala como la elección a favor de la demanialidad está justificada entre otras cosas, porque en el patrimonio arqueológico no se dan los problemas de interferencias con la libertad de creación cultural, y porque de esta forma se evitan los peligros de dispersión e incontrolada apropiación a las que están expuestas estos bienes<sup>1431</sup>. Al mismo tiempo todas las excavaciones y prospecciones tenían que ser autorizados por la Administración, de ahí que se definiera la publicación del Patrimonio Arqueológico. El régimen de la propiedad del bien arqueológico descubierto iría variando desde una primera etapa inspirado en un régimen civilista, por la que el propietario del fundo se convertía en su dueño, aunque el Estado podía adquirirlo por justo precio, a una posterior, por el que se establecía un dominio público sobre los bienes descubiertos. No todos los bienes arqueológicos gozaban de este régimen de dominio público, ya que tal condición dependían de factores concretos (por ejemplo, formar parte de una colección pública)<sup>1432</sup>. Se va a definir un procedimiento sancionador sobre aquellos descubridores que no comunicara dichos descubrimientos, ya perderían el premio en metálico ofrecido por la Administración.

#### **2.2.4. La tutela del Estado sobre las Corporaciones Municipales en el ámbito de la conservación de bienes de interés histórico-artístico.**

#### **2.2.5. La acción del Estado en la tutela del Patrimonio Monumental: los límites de la intervención administrativa.**

##### **2.2.5.1. La institucionalización administrativa en la tutela patrimonial.**

En la mayor parte de la doctrina se ha defendido tradicionalmente la inexistencia de un verdadero aparato administrativo por parte de los Estados Liberales a la hora de proteger el Patrimonio Histórico-Artístico, fruto quizás de una lectura simplista del proceso configurador, ya que sería por el contrario en los Estados Liberales donde se va a ir fraguando la génesis de una incipiente acción tutelar del Estado sobre el Patrimonio Histórico-Artístico, contando con una verdadera instrumentalización estatal, que abrirá el camino al posterior sistema contemporáneo de protección estatal propio de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho. Sin embargo, no podemos obviar algunas dificultades, algunas insalvables, que se encontraría la propia Administración, siendo el límite del derecho a la propiedad privada su eje primordial, a las que

---

<sup>1431</sup> En opinión de María Angeles Querol y Belén Martínez Díaz, *se caracterizan éstos por estar excluidos del tráfico jurídico privado, exclusión que tiene como principal finalidad la de asegurar el uso público de esos bienes, lo que no resulta incompatible con la existencia sobre ellos de una propiedad privada (...) lo cierto es que la expresión de dominio público no define al Patrimonio Arqueológico, ya que se trata de una relación inversa: los bienes son de dominio público, porque pertenecen al Patrimonio Arqueológico* QUEROL, M<sup>o</sup> Angeles; MARTINES DIAZ, Belén *La gestión del Patrimonio Arqueológico en España* Alianza Universidad Textos., p.41.

<sup>1432</sup> BARCELONA LLOP, Javier Reflexiones dispersas sobre el derecho de los bienes culturales Historia de la propiedad. Patrimonio Cultural, p.592; El dominio público arqueológico, *Revista de Administración Pública*, 151, 2000, pp.133y ss.

se unirían las siguientes: 1º) El contexto político-administrativo en que estaba inmerso en este momento la configuración del propio Estado Liberal desde las instancias del poder político; 2º) La acción administrativa de policía administrativa de no intervencionismo estatal propio de un Estado Liberal, que en cierta manera limitaba la acción tutelar. La actividad administrativa del Estado de clase única está regida por los principios de abstencionismo de los poderes público en la vida económica y social (Giannini)<sup>1433</sup> y 3º) La descoordinación de los primeros instrumentos administrativos protectores del Patrimonio Histórico-Artístico. Por consiguiente, podemos afirmar que con la delimitación de un Derecho Público del Patrimonio Histórico-Artístico, se va a ir articulando un aparato administrativo en el seno del Estado en orden a aplicar la normativa estatal sobre la esfera privada que se ha ido definiendo como un verdadero obstáculo en la propia configuración. Durante la Revolución Francesa se produciría el primer sistema administrativo claramente moderno, destacándose dos cuestiones primordiales: la desaparición de la identificación del Estado con la figura del Rey, por lo que la Administración no es ya del monarca y la llamada juridización de la vida pública, identificándose el Estado con el Derecho. Como apunta García de Enterría, a partir de la Revolución Francesa, el Estado no se va a limitar a ejercer tan sólo actividades derivadas del título de soberanía, ligadas a los fines del Estado, justicia, hacienda, defensa..., sino que, al servicios de fines de utilidad social va a ir asumiendo parcelas de ámbitos de actividad hasta el momento residenciados en el campo de la sociedad. Ambos hechos lo encontramos ya plenamente proyectado en la administración incipiente de protección del Patrimonio Histórico-Artístico<sup>1434</sup>. El desarrollo del Estado Liberal en las décadas centrales del siglo XIX va a introducir una penetración más intensa de la Administración, especialmente en aquellas actividades sociales que necesitaban la realización de obras públicas, surgiendo el concepto de servicio público. Fue en el derecho de los ferrocarriles donde se va a generar realmente el derecho administrativo público<sup>1435</sup>, proyectándose posteriormente a otros sectores, como fue el caso del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico. Prácticamente en todos los ordenamientos liberales del momento se van a ir introduciendo un verdadero aparato administrativo de protección del Patrimonio como servicio público del Estado

Configuración de la	<b>Administración</b>	<b>Administración del</b>	<b>Institucionalización</b>
---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------

<sup>1433</sup> Giannini; Maximo Severo El poder público. Estados y administraciones públicas. Civitas, Madrid, 1991, p.64.

<sup>1434</sup> GARCIA DE ENTERRIA, E. Revolución Francesa y Administración contemporánea. Taurus, Madrid, 2º edición, 1981.

<sup>1435</sup> Se incluye el caso de los ferrocarriles como ejemplo de la intervención de la Administración en el seno de la esfera privada y al mismo tiempo como va generando nuevas figuras jurídicas de Derecho Administrativo que se proyectará en otros sectores.

administración del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal	<b>Estatal</b>	<b>Patrimonio Histórico-Artístico</b>	<b>administrativa del Patrimonio Histórico-Artístico</b>
<b>Estado Liberal Inicial (1789-1848)</b>	Incipiente Administración Estatal	Incipiente Administración del Patrimonio Histórico-Artístico.	Inspectores de Antigüedades. Comisión Nacional y Provinciales de Antigüedades Incipiente institucionalización museística.
<b>Configuración definitiva del Estado Liberal (1848-1870)</b>	Expansión de la Administración Pública del Estado	Configuración de la Administración del Patrimonio Histórico-Artístico	
<b>Crisis del Estado Liberal (1870-1914)</b>	Triunfo del Estado Administrativo con incipiente función pública	Delimitación estructural de la Administración del Patrimonio Histórico-Artístico.	

Los primeros instrumentos administrativos del Estado Liberal: Del papel de las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia a los inspectores de Monumentos y las Comisiones de Monumentos. Durante el Antiguo Régimen se define el primer planteamiento de un marco administrativo en el ámbito proteccionista del Patrimonio Histórico-Artístico. Las Academias de Bellas Artes y de la Historia nacen en el seno del Antiguo Régimen con una vocación de tutela de la producción artística que se va a ir generando desde los dictámenes oficiales de la propia Monarquía. No cabe duda que en el seno de la Monarquía Francesa, y siguiendo su modelo, en el resto de las Monarquías Absolutistas, representaron un papel primordial de divulgación cultural digno de destacar. La conciencia patrimonial en aras de defender y conservar bienes histórico-artísticos que formara parte del pasado los convertiría en el primer órgano oficial de administración de protección del patrimonio histórico-artístico, teniendo incluso la potestad de legislar, mediante reglamentos y ordenanzas, bajo los auspicios del propio Monarca, sobre toda materia relacionada con la protección patrimonial. En el Estado Liberal, las Academias de Bellas Artes y de la Historia supieron adaptarse al nuevo régimen, por lo que en principio no perdieron la potestad administrativa que había conseguido el periodo anterior. Entre sus actividades se promovieron la confección de inventarios, catálogos, inspección e incluso su voz fue primordial a la hora de declarar un bien como Monumento Histórico-

Artístico<sup>1436</sup>. En muchas ocasiones con la destrucción patrimonial que se fue generando a lo largo de todo el periodo liberal, las Academias se convirtieron en verdaderos órganos de reclamación administrativas, bien desde las instancias privadas de círculos de eruditos o promovidos por ellas mismas. Las consecuencias de los procesos revolucionarios en los inicios del Estado Liberal, la existencia de un amplio mercado fraudulento de bienes históricos-artísticos, la inercia de las propias autoridades locales a la hora de impedir la devastación del patrimonio e incluso las voces de los círculos eruditos que fundamentaron una concienciación patrimonial dieron lugar a la creación de nuevas figuras administrativas, como fue el caso de los llamado Inspectores de Monumentos, nacido en el derecho francés, siendo el Informe Guizot.

#### **2.2.5.2. El destino de los Bienes Histórico-Artísticos: La institucionalización administrativa del Museo, Archivo y Biblioteca Pública.**

##### ***- El concepto de Archivo Público.***

A partir del momento en que el ser humano empieza a dejar constancia escrita en soportes duraderos de todo aquello que entiende relevante para llevar a cabo su actividad política o económica, en realidad no hace más que crear de manera espontánea los archivos, aunque inicialmente con la voluntad inequívoca de justificar sus derechos y propiedades y convertirlos en arsenales legitimadores del poder. Con el tiempo, la lenta sedimentación de la documentación generada propició su conservación en los archivos (...) Es evidente que no todos los documentos generados por las personas físicas y jurídicas o por las instituciones y empresas tienen valor histórico y que sólo una parte limitada de lo que se produce requerirá de su perdurabilidad para el futuro (...) <sup>1437</sup>. La configuración jurídica del Archivo como agrupación de documentos a conservar y proteger por el Estado como bien nacional nacería en el seno del proceso revolucionario liberal, aunque la esencia de su concepción ya habría tenido un proceso anterior. Como apunta Manuel Romero Tallafigo *la finalidad ética del archivo como servidor de testimonio e información ha sufrido un cambio substancial en lo referente a la calidad y cantidad de usuarios, tanto con fines patrimoniales, jurídico o de continuidad administrativa (...). Desde la antigüedad hasta nuestros días los archivos han sido valorados por cualquier administración eficaz como herramientas fundamentales de gestión y conservación de memorias de los derechos (...)* <sup>1438</sup>. Los caracteres primordiales del Archivo Público como institución

<sup>1436</sup> Sobre el papel de las Academias de la Historia y de Bellas Artes en el papel de la protección de bienes históricos-artísticos,

<sup>1437</sup> ALBERCH, Ramón Archivos, memoria y conocimiento en ALBERCH i FIGUERAS, A., BOIX LLONCH, Lurdes, NAVARRO SASTRE, Natalia VELA PALOMARES, Susana *Archivos y cultura: manual de dinamización* Editorial Trea, Gijón, 2001, p.13.

<sup>1438</sup> ROMERO TALLAFIGO, Manuel *Archivística y archivos. Soportes, edificio y organización. 3ª edición*, Octubre, 1997, p.69.



administrativa propia del Estado Liberal podemos sintetizarlos en los siguientes puntos:

- a) El acceso público del bien histórico-artístico que va a promover su divulgación
- b) El fundamento jurídico de la existencia del archivo histórico público va a estar determinado por el interés público del documento como valor histórico de exaltación nacionalista.

Durante el Antiguo Régimen había surgido una concepción del archivo como arsenal de autoridad, insertado en sí mismo una triple funcionalidad: los archivos como potestad, los archivos como instrumentos de la administración y como instrumentos de la historia. Los documentos eran reservados a la potestad monárquica como sustento del poder del Estado, y al mismo tiempo fueron prueba y materialización de privilegios, jurisdicciones y actuaciones. Con el proceso revolucionario francés y el surgimiento del Estado Liberal los Archivos se convierten en soportes materiales de legitimación de los ideales burgueses de historia y cultura nacional. Las distintas legislaciones de la archivística nacidas en el Estado Liberal pusieron de manifiesto la soberanía nacional sobre los archivos públicos del Estado, que dejan de ser reales para pasar a ser nacionales, la publicidad de los archivos para la ciudadanía y un sentido de concentración por el estado de archivos privados nobiliarios y eclesiásticos confiscados, dentro todo del concepto de soberanía nacional. El proceso de nacionalización que va a marcar la evolución del Archivo Nacional en el seno del Estado Liberal, por lo que muchos fondos y series documentales acumulados en palacios, castillos, catedrales, parroquias, cofradías, conventos y monasterios, instituciones de beneficencia e, incluso, municipios fueron incluidos como bienes nacionales del Estado. El papel protagonista de los archivos en el proceso de afirmación de identidades nacionales de los nuevos Estados-Naciones que aparecen en sintonía con la ideología liberal y la revolución burguesa del siglo XIX. La emergencia de los archivos, y sobre todo la creación por toda Europa de los archivos nacionales, en tanto que depósitos de la memoria escrita se asientan en la voluntad política de utilizar los documentos históricos como justificantes de un pasado común que permitía legitimar estas nacientes identidades nacionales a los ojos de los ciudadanos. El siglo XIX es el siglo de los Archivos Nacionales, como el creado en 1789 en Francia, el Public Record Office en Inglaterra en 1851 o el Archivo di Stato di Roma en 1871. El nacimiento de la archivística como ciencia coincide con la difusión de las corrientes de pensamiento que contribuyeron a la transformación de la sociedad feudal. Entroncando con una mayor toma de conciencia del hecho nacional, aparece entonces el concepto de soberanía

*- La configuración del Museo Público en el Estado Liberal.*

La idea de conservar y proteger un Legado Patrimonial en un espacio determinado por parte de los poderes públicos cuenta con claros antecedentes desde la Antigüedad, pero no es hasta el siglo XIX cuando nacería el museo como institución pública, fundamentada en *la practica la teoría de que el arte era creación del pueblo y, en consecuencia, su disfrute no podía ser privilegio de una clase social potentada*. La lectura de la definición de museo que aparecen en los estatutos del ICOM aprobado en Viena el 24 de agosto de 2007 establece su concepción jurídica entendiendo a aquel como *una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recre* (art.3º. Sección 1). Sin embargo, en el transcurrir de los procesos confiscatorios del modelo revolucionario liberal va a ir dando paso a la concepción del llamado museo público. Al mismo tiempo que nace el museo como una nueva realidad social y política, surgen los problemas de su gestión institucional, lo que va a dar lugar a una incipiente respuesta jurídica promulgándose una serie de sistemas normativos por toda Europa, destacándose el carácter público de las colecciones los bienes artísticos e históricos a proteger. Sin duda alguna nos encontramos desde las confiscaciones revolucionarias de la propiedad estamental monumental con la defensa jurídica de que los bienes son propiedad de la nación, han dejado de formar parte de la esfera privada de ningún estamento, ni ningún particular. La titularidad jurídica de estos bienes por parte del Estado fundamentado en su régimen patrimonial se convierte en el eje ordenador de todo el sistema normativo de los museos de titularidad pública durante el periodo liberal. Joan Llinares delimita algunas de las connotaciones jurídicas que supone la titularidad pública de los bienes históricos-artísticos depositados en el Museo en el ámbito de la legislación contemporánea, que nos puede ayudar a la hora de abordar la cuestión en el ámbito del periodo liberal: *No pueden ser enajenados, es decir, vendidos, cedidos o donados a terceros (inalienabilidad), excepto si se trata de transmisiones entre las propias Administraciones públicas; Tampoco puede ser adquirido por terceros mediante usucapión o tenencia prolongada de los mismos, sea cual sea el título de la posesión y si este se crea de buena o mala fe (imprescriptibilidad), es decir la administración titular nunca puede perder su propiedad cuando por pérdida o sustracción hubiera perdido en un determinado momento la posesión de la pieza, independientemente del tiempo transcurrido y de quien la tuviera en su poder sea cual sea el título de adquisición y por último, en cuanto que bienes perteneciente al dominio público tampoco podrán ser objetos de embargo por resolución o sentencia judicial sumando a las otras dos características e imprescriptibilidad, la de la inembargabilidad*<sup>1439</sup>.

Sin duda alguna todos estos caracteres se irían delimitando durante el desarrollo del Estado Liberal, especialmente al convertirse en bienes de

<sup>1439</sup> LLINARES I GÓMEZ, Joan Titularidad de los museos. La gestión de los museos en PEÑUELAS REIXACH (Ed.) Lluís, *Administración y dirección de los museos: Aspectos jurídicos*. Fundación Gala-Salvador Dalí, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2008, p.165.

dominio público, que pasaban a ser propiedad pública. En una rápida mirada podemos percibir una serie de fases primordiales a la hora de ir configurando la titularidad pública de los bienes que formarían parte del Legado Patrimonial:

1º) Una etapa emergente que se desenvolvería en la segunda mitad del siglo XVIII, por lo que el museo se convierte en una aspiración ilustrada en orden a exponer una serie de bienes y objetos históricos-artísticos para la educación y felicidad del pueblo. Como apunta Mark Luca la idea de un museo público *es la expresión del espíritu del siglo XVIII, que generó el entusiasmo por el valor de la educación y difundió la idea de que las colecciones, que habían sido fuentes de instrucción y placer para unos pocos, se tenían que hacer accesibles a todos*, a lo que añade Ballart, *a la luz de la Ilustración, las colecciones debían tener una utilidad pública. Los templos de las artes y de las ciencias que eran las academias y sus museos, así como las galerías de arte de los poderosos, debían abrirse a la sociedad para provecho de las gentes corrientes*. Con esta idea se va a dar la apertura pública de algunas colecciones reales en la Europa del siglo XVIII, siendo un buen exponente, la Monarquía francesa de Luis XIV. Su tutela jurídica seguía correspondiendo a la Corona, que al mismo tiempo se consideraba del dominio privado del Soberano.

2º) La tutela jurídica de los bienes integrantes del museo público por el Estado se va a transformar a partir del proceso revolucionario, por lo que las antiguas colecciones regias y algunas conventuales van a pasar a formar parte del patrimonio estatal, serán consideradas como bienes nacionales. En la mayor parte de la Europa Occidental, fueron surgiendo una serie de Museos Nacionales, cuyo dominio correspondería al pueblo, como nuevo sujeto político de la historia, sustituyendo a la concepción estamentalista de las antiguas colecciones artísticas del Antiguo Régimen. No cabe duda que la Revolución Francesa marcaría la génesis definitiva de la concepción del Museo Público. De esta manera la Convención en 1791 promovería la creación del Museo de la República, reuniendo las colecciones de la corona, de los nobles emigrados, de los conventos suprimidos y las obras procedentes del resto de Europa como botín de guerra. Como trata de hacer ver María del Carmen Valdés, *se trata de un museo público no solo porque está abierto a todos los individuos, sino también porque lleva consigo la nacionalización del patrimonio histórico-artístico, la democratización de los bienes culturales, jurídicamente de naturaleza pública, es decir, propiedad del Estado, y la universalización de la educación*. La naturaleza pública del Museo como instrumento del Estado-Tutelar está perfectamente recogida en los términos de E. Hooper-Greenhill, *el museo formó parte integral del nuevo estado democrático y se convirtió en elemento esencial de los esfuerzos gubernamentales por educar a los franceses como ciudadanos*. Posteriormente la política napoleónica condujo a consagrar el modelo de un museo público con

el fin de exaltar los bienes nacionales del Imperio<sup>1440</sup> a lo que se uniría el despertar de los nacionalismos abrió las puertas a los llamados muesos nacionales. Con la instauración definitiva del Estado Liberal, se va a ir produciendo la adquisición por el Estado de los bienes pertenecientes a la Iglesia Católica, a través de una serie de medidas legisladoras marcada bajo el prisma de la desamortización que se fue iniciando desde la propia génesis del proceso revolucionario, por lo que el destino de los bienes muebles amplió el depósito de los museos públicos.

<b>Configuración jurídica de la institución Museística.</b>	<b>Titularidad jurídica.</b>	<b>Régimen Patrimonialista</b>
<b>Monarquía Absolutista</b>	Acceso Público de las Galerías Reales	Bienes de dominio Privado
<b>Estado Liberal</b>	Museo Público	Bienes de Dominio Público.

***- La Biblioteca Pública: Un servicio público de divulgación cultural en el Estado Liberal.***

En 1994 el manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca Pública definía a la biblioteca pública como un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información. En su exposición inicial se consideraba a la biblioteca pública como puerta local hacia el conocimiento, constituyendo un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales. Como ocurriría en el ámbito mueístico, podemos afirmar que con la consagración del Estado Liberal asistimos a la delimitación de las llamadas bibliotecas nacionales. Entre los factores que van a ser determinantes a la hora de configurar las bibliotecas públicas van a ser:

- 1º) La divulgación de la cultura como instrumento configurador de la sociedad liberal, herencia de las concepciones de la ilustración.
- 2º) La confiscación de un gran número de bibliotecas que habían sido propiedad de la Monarquía y de la Iglesia, verdadero depositario de la cultura del Antiguo Régimen.

<sup>1440</sup> En el periodo napoleónico abren sus puertas la Pinacoteca Brera (Milán), el Koninklijk, después Rijksmuseum (Amsterdam), el Museo de Bruselas.

3º) El nuevo valor social que se le atribuye al libro, que pasa de ser un objeto de lujo a un instrumento divulgador del conocimiento.

	Titularidad Jurídica	
Monarquía Absolutista	Bibliotecas Reales y Eclesiásticas	Depósitos del saber en el Antiguo Régimen
Estado Liberal	Bibliotecas Públicas	

### **3. La transformación de la propiedad monumental y su impronta en el proceso histórico del Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Público en el Estado Liberal.**

Como en otras materias legislativas, el Derecho Patrimonial Histórico-Artístico surge en el seno del Estado Liberal con una identidad diluida, donde se entremezclan intereses contrapuestos, materias divergentes, e incluso no se aclara su concepción pública o privada al carecer de un verdadero cuerpo doctrinal definidor de conceptos jurídicos plenamente establecidos. Va a ser durante todo el amplio periodo que transcurre desde finales del siglo XVIII hasta el final de la I Guerra Mundial, una materia en construcción, no ajena de obstáculos no solamente legales, sino del propio contexto social y político en que le toca vivir. La heterogeneidad de leyes, la falta de cohesión normativa, de coordinación homogénea de contenidos, induce a insertar el Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en el Estado Liberal en ámbitos diferenciadores del ámbito del Derecho. La lectura de las distintas normativas que el Estado Liberal va a ir produciendo podemos resaltar que una gran parte del articulado se refiere a la regulación del aparato administrativo que va a surgir como derivación en muchos casos del Ministerio de la Instrucción Pública y los procedimientos de intervención estatal, designando los distintos instrumentos de tutela jurídica, donde se incluiría un sistema de penas y delitos propios del Código Penal a los que se uniría una amplia disposición normativa dedicada a los derechos y deberes de los propietarios privados, especialmente su contraposición a los intereses generales del Estado, propia de un sistema de Derecho Privado.

Cabe precisar como en la configuración del Derecho Patrimonial Histórico-Artístico subyace la controversia que en el seno del Estado Liberal va a ser constante en la articulación de todo el ordenamiento jurídico, el enfrentamiento entre los intereses privados fundamentados en el Derecho de la

propiedad privada (que en algunos casos va a ser un derecho hegemónico) en controversia con los intereses públicos del Estado por conservar y salvaguardar aquellos bienes que considera primordiales. De ahí que en la construcción de un verdadero ordenamiento jurídico en torno a la tutela del Patrimonio Histórico en el Estado Liberal nos vamos a encontrar con dos hechos claramente delimitadores: 1º) La existencia constante de la dicotomía del carácter público y privado que va surgir en el seno de este sector del ordenamiento, tanto en la delimitación de un hipotético derecho público que no llegará a cuajar definitivamente, y un Derecho Privado poco delimitado que subyace en el derecho de la propiedad individual; 2º) El propio objeto del Derecho, el Patrimonio Histórico-Artístico quedará diluido en su propia identidad jurídica, a raíz de las discrepancias de intereses privados y público que van a impedir definir claramente el bien que se va proteger, originando la llamada cuestión de la propiedad monumental.

Podemos establecer tres modelos primordiales a la hora de configura un derecho patrimonial de carácter histórico-artístico de carácter público anterior al perfilado en el derecho contemporáneo:

1º) carácter patrimonialista del legado Patrimonial por parte de la Monarquía absolutista. Los Bienes Históricos-Artísticos pertenecen a la Corona que encarna en su personalidad jurídica al Estado.

2º) Etapa aperturista del Legado Patrimonial de la Corona en la etapa de la Ilustración. La Monarquía Desposta sigue teniendo en propiedad los bienes históricos-artísticos, pero abre al público las colecciones que hasta este momento no se veían. 1666 en Suecia, etc.

3º) Concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico del Estado Liberal. El Estado se convierte en propietario de los bienes del Patrimonio Real y de la Iglesia Católica con los procesos de nacionalización (medidas desamortizadoras). Intervención del Estado en la propiedad privada.

### **3.1. A modo de precedente: Una incipiente concepción pública del Patrimonio Monumental en el Despotismo Ilustrado.**

Tradicionalmente se ha afirmado por la doctrina que no sería hasta el advenimiento de la Revolución Francesa cuando se puede considerar la génesis de una concepción del Patrimonio Histórico-Artístico como bien de interés público. Sin embargo, podemos ya precisar como en el ámbito del régimen del Despotismo Ilustrado se fueron generando algunas normas jurídicas que abrirían el camino de una verdadera tutela jurídica pública del Patrimonio Monumental. El cambio entre una tutela patrimonialista a una tutela pública será la clave de la evolución jurídica del Patrimonio Monumental, pudiéndose



afirmar que sería en la segunda mitad del siglo XVIII se asiste una verdadera conciencia pública del Patrimonio por el que se identifique una comunidad formando parte de su propia esencia, aunque no cabe duda que podemos encontrar algunas actuaciones desde la Antigüedad que podemos apreciar una cierta publicación sobre algunos bienes pertenecientes al legado patrimonial<sup>1441</sup>. La dualidad entre una concepción patrimonialista y una concepción pública del Legado Patrimonial ha sido constante en la historia de la civilización. Entendemos por el concepto patrimonialista al uso privado que tenían los bienes adquiridos sin ninguna identificación con el resto de la comunidad, pudiendo ser el propietario el propio Estado o cualquier particular, a diferencia del concepto público del mismo, en el que los bienes adquiridos se delimitan como parte de la sociedad, de la comunidad, identificándose con su propia identidad. En un recorrido esbozado podemos delimitar una concepción patrimonialista en el coleccionismo nacido en las primeras civilizaciones antiguas con sentido histórico –Egipto, Mesopotamia, China, Grecia y Roma–, por el que se desarrolla una concepción privada del mismo, bien fuera del propio Estado o bien de los particulares, por el que el propietario exhibía los bienes más como un fundamento de exaltación personal o la propia institución política del Estado. No podemos hablar de una concepción pública del Patrimonio en la Edad Media, ya que los tesoros reales serán inaccesibles para la población, debido al indudable carácter de propiedad personal y privacidad de estos bienes acumulados en las cámaras. Sin embargo, en el caso del patrimonio eclesiástico, se apunta una novedad digna de resaltar: *la iglesia medieval, al igual que el templo griego, es centro de la cultura y, como tal, los tesoros allí depositados poseen un carácter público, pues su contenido se relaciona con los intereses comunitarios, en este caso cristianos, representados por una institución que en Occidente engloba a todas las clases sociales y trata de acoger a la humanidad entera (...) todo el rico repertorio de bienes, ornamentos, trofeos, albergados en las iglesias (...) no devienen posesión pública, sino que pertenecen por entero a Dios*. Desde esta perspectiva se está vislumbrando una participación pública, aunque sea por intereses religiosos, de los bienes que están situados en el interior de un templo. Lo sagrado se une a los intereses generales de la comunidad, quedan entrelazados como parte de su esencia colectiva. Durante el Renacimiento, se fueron poniendo de modo un amplio coleccionismo privado entre los mercaderes, pudiendo ser los Medici su arquetipo, en la que se define una verdadera concepción patrimonialista, exponiéndolo en un lugar privilegiado,

---

<sup>1441</sup> La publicación del Patrimonio Cultural como bien que forme parte de una comunidad humana tendría su génesis ya en la propia Roma podemos encontrar un hecho insólito en la Antigüedad, otorgar consideración de patrimonio cultural público a la propiedad artística privada. Siguiendo a Plinio, sería Marco Agripa quien intentó convencer al pueblo romano de la necesidad de exponer en lugares públicos las estatuas y pinturas hasta entonces conservadas por los nobles romanos en sus villas de campos y residencias privadas.

los Uffizi en 1581, un inmueble ubicado simbólicamente en el centro del poder de Florencia.

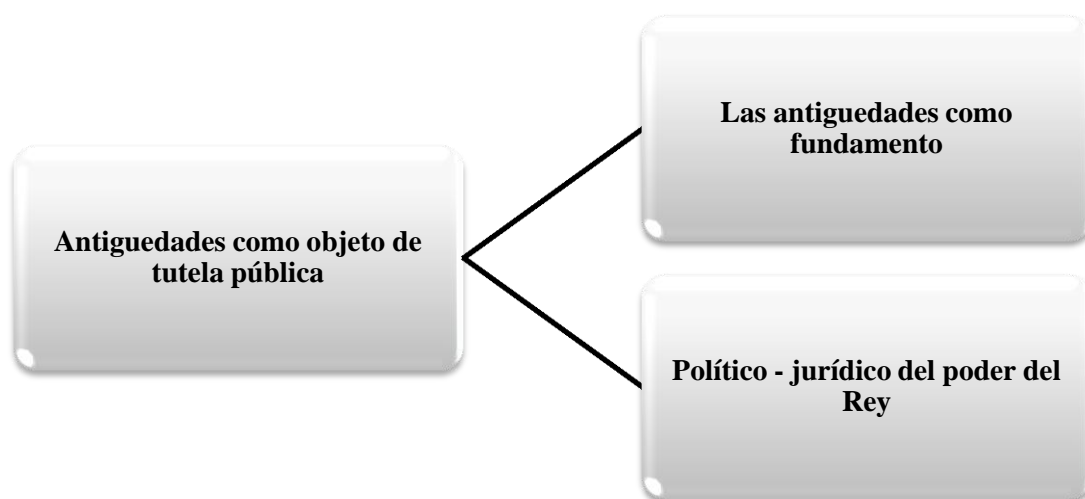
Durante la segunda mitad del siglo XVIII la conciencia pública del patrimonio histórico-artístico aparece todavía muy diluida al contemplarse en muchas ocasiones un verdadero concepto patrimonialista del Patrimonio por parte de la Monarquía y de la Iglesia, abocada más a sus propios intereses privados que a una verdadera significación pública de la tutela jurídica del Legado Patrimonial. García Fernández *El Estado Absolutista se enfrenta a la regulación jurídica de los bienes culturales con los mismos criterios utilizados en la Edad Media, al menos hasta el siglo XVIII. Es decir, persiste la preocupación de la Iglesia y del Estado a favor del cuidado de los templos y la normativa del patrimonio real tiene una notable incidencia sobre el coleccionismo, pero no se aprecia transformación sustancial ni en los términos jurídicos empleados ni en los fines perseguidos (...) Encontramos pues las mismas lagunas que ya vimos en el Derecho Medieval: ausencia de previsiones sobre el dominio en un momento en que los principios dogmáticos sobre la propiedad empiezan a clarificarse*<sup>1442</sup>. La tutela jurídica del Patrimonio Monumental como bien de interés jurídico será controlada por la propia Monarquía, concretamente las llamadas Antigüedades, aquellos bienes que van a fundamentar la exaltación de la institución política que representa la propia identidad de la nación, y que consideraran como un pilar primordial del bien común de los súbditos que forman parte de la Corona. Una amplia normativa de protección y tutela del Patrimonio Monumental irá configurando un ensayo de conceptualización jurídico que antepondrá los intereses de la comunidad política a la que identifica, el pueblo, frente a los particulares, iniciándose la idea de que un conjunto de bienes históricos-artísticos que forma parte del Legado Monumental tiene que ser protegido por el Estado como bien de interés público. Al mismo tiempo se ha ido delimitando unos bienes históricos-artísticos que no se han publicados, sino que siguen en la esfera privada como disfrute de sus propietarios, y que aparecen insertados bien en el seno de los derechos estamentales, como son los bienes culturales de interés religiosos en el caso de la Iglesia, los bienes muebles e inmuebles adscritos al linaje nobiliario, que se ha ido acrecentando a lo largo del siglo XVIII, por lo que no se le reconoce una legitimación pública por parte del Estado Monárquico para intervenir sobre los mismos en bien de sus súbditos, o bien en el ámbito del llamado coleccionismo erudito practicado por los llamados anticuarios formado en las filas de la incipiente arqueología clásica que desde la etapa renacentista va a tener un amplio impulso, y que la Monarquía va ir limitando su exportación como primera medida de la política administrativa llevada a cabo en el seno del derecho de la propiedad privada. Y es que el comercio de arte se va a organizando, que aunque excepcionalmente se siguen vendiendo en ferias, como la de Saint-Germain en París y la de Leipzig, iba emergiendo la figura del agente que se encargaba de la adquisición

<sup>1442</sup> GARCIA FERNANDEZ, 1988, p.188.

de las obras de arte encargadas, que bien eran eruditos o incluso artistas como fueron los casos de Rubens o el propio Velázquez. Van surgiendo una amplia reglamentación en las operaciones de compra y venta, como los que contaba ciudades como Amberes. Van surgiendo todo tipo de coleccionistas en el ámbito europeo, por lo que se va incrementando en gran número los llamados gabinetes de curiosidades, que incluso fueron abiertos algunos de ellos al público.

### **3.1.1. Las antigüedades como objeto de tutela pública de la Monarquía Ilustrada.**

La primera construcción conceptual del Patrimonio Monumental se concebiría durante la segunda mitad del siglo XVIII bajo la denominación genérica de antigüedades.



#### ***- Las antigüedades como fundamento político-jurídico del poder del rey.***

La verdadera identidad del Antiguo Régimen lo marca la exaltación de la Monarquía Absolutista en todas sus facetas, desde lo puramente político a la vida social y cultural, sin obviar el sustento espiritual en que se fundamenta su poder, que lo legitima y al mismo tiempo le da su propio sentido histórico, marcando por este camino la concepción que se va a tener del legado patrimonial. Al cuestionarnos la conciencia histórica de la sociedad barroca y con ello el concepto de tiempo, podemos precisar sin más que se identificará con una mera delimitación lineal, donde el pasado adolece de una vitalidad propia, pero sigue estando ajena a la delimitación del presente, teniendo como objetivo primordial el legitimar el orden social establecido. La linealidad de la

concienciación histórica lo marca al mismo tiempo una lectura profundamente espiritual, inspirada en las concepciones religiosas contrarreformistas, dando lugar al hecho cultural del Barroco, por lo que la fugacidad de la vida y la añoranza de una vida en un futuro espiritual, lo aleja de la concepción material del pasado histórico. No podemos concebir por consiguiente una percepción del cambio histórico que determine una valoración del legado patrimonial, más aún en amplios sectores de la sociedad, donde su sentido histórico solamente está imbuido en el devenir del presente y en la meta del futuro supramaterial, el pasado es algo menor en su concepción temporal, por lo que no existe prácticamente un sentido de la historia en el ámbito social. Es más, el sentido histórico de la sociedad estará dirigido por el propio Estado Absolutista al seleccionar una conciencia histórica de exaltación de la Monarquía y de los valores religiosos de la Iglesia Católica. La exaltación de la Monarquía promoverá una cierta concienciación patrimonial en la medida que exalte su poder terrenal, su misión de dirección de la comunidad. Las obras de la Antigüedad Clásica que irá acaparando en sus colecciones simbolizan en cierta forma el paralelismo de las formas de gobierno, por lo que tienen más una lectura simbólica que de valoración histórica o estética. No hay Casa Real en Europa que no adquiriera entre los siglos XVII y XVIII una colección de obras de la Antigüedad Clásicas. Desde finales del siglo XVII asistimos en el ámbito cultural a un verdadero proceso de normativización de toda la producción cultural que se fue generando como camino para la elaboración de un verdadero arte oficial, fundamentado en las normas cortesanas sostenidas en el denominado espíritu de Versalles y en las normas academicistas, promulgadas por las distintas academias que florecieron por toda Europa siguiendo los pasos de la fundada por Luis XIV. Se estaba coartando con ello el individualismo creativo, por lo que el artista renunciaba a toda imaginación productiva que los alejara de los cánones de lo oficial. El Rococó como apunta Rafael Agulló era un arte concebido para la deleitación, el juego y la sugestión, sujeto al normativismo de una monarquía absoluta, la francesa, cuyo fin, con la Revolución de 1789, significaría el suyo propio<sup>1443</sup>. Con la Ilustración nace una nueva percepción del sentido del tiempo, una nueva visión de la realidad histórica. Desde su propia concepción ya se replantea el hecho de que se está asistiendo a una nueva etapa histórica, un nuevo modelo de vida, lo que Kant había definido como edad minoritaria del ser humano. Al mismo tiempo, que ya se percibe una ruptura en el sector de los intelectuales de la Enciclopedia, se asiste a la concepción del tiempo como progreso, definiéndose un sentido profano de la historia que sustituye el sentido escatológico sagrado, propio de la mentalidad barroca

*-Las antigüedades como objeto de la investigación científica.*

<sup>1443</sup> ARGULLOL, Rafael *Tres miradas sobre el arte* Barcelona, 1985, p.75.

La revalorización de la Antigüedad tiene una implicación específica en el gusto estético, con el consabido rechazo al Rococó, que entra en un claro agotamiento formal y el consiguiente nacimiento del Neoclasicismo. Su singular interpretación del arte griego con escultores de la talla del italiano Canova y del danés Thorwalsen, o los frescos del francés Louis David, impregnaron el recorrido evolutivo del arte de finales del siglo XVII e incluso se prolongaría hasta la primera mitad del siglo XIX. Se va fraguando al mismo tiempo la definición científica de la Historia del Arte como nueva disciplina que va a ensayar una construcción objetiva del análisis de los bienes que irán configurando la idea de un Patrimonio, con la publicación de la obra de Winckelmann, *Historia del arte en la Antigüedad*, en 1764, un ensayo fundamentado en el análisis de los estilos, especialmente de la antigüedad clásica, dividiendo en varias etapas la evolución del arte griego, que superaría para siempre el carácter narrativo fundamentado en biografías de artistas que hasta este momento había sostenido el análisis de la historia del arte<sup>1444</sup>. Una nueva mirada se aprecia a partir de este momento en el legado patrimonial, ya que no solamente se ven el reflejo de un puro gozo estético sino que se insertan en un proceso más amplio, donde se convierte en parte del proceso temporal. Se recupera el concepto de la Antigüedad, especialmente tras el descubrimiento de las ciudades sepultadas de Herculano y Pompeya<sup>1445</sup>, a la sombra de una incipiente arqueología clásica que permitió un conocimiento más profundo de las obras antiguas y a una pasión por las obras de la antigüedad<sup>1446</sup>. Se fueron programando expediciones artísticas con el objeto de conocer y reproducir las obras de la antigüedad en su lugar de origen, destino primordial del Grand Tour, siendo Roma la meta final de la misma, evocada tan admirablemente en las ilustraciones gráficas de G. Piranesi (1720-1778). La veneración por la Antigüedad Clásica no se limitará exclusivamente al campo de las Bellas Artes, sino que se irá proyectando en otros ámbitos de la creatividad humana, como fue el caso de la literatura, con la veneración de la obra de Homero<sup>1447</sup>. Sin embargo, la Ilustración rompe el monopolio cultural de la Antigüedad Clásica como única cultura histórica a considerar, introduciéndose en el ámbito de la investigación histórica, culturas hasta ahora no considerada como digna de ser

---

<sup>1444</sup> WINCKELMANN, J. *Historia del arte en la Antigüedad*, Aguilar, Madrid, 1955.

<sup>1445</sup> ASSUNTO, R. *La antigüedad como futuro. Estudio sobre la estética del neoclasicismo europeo*, Madrid, Visor, 1990.

<sup>1446</sup> Siguiendo a M<sup>a</sup> José Martínez Justicia *será el impulso dado por el siglo de las Luces el que despierte el deseo de conservar los testimonios del pasado, que es sentido muy pronto como una necesidad (...) desde una postura crítica que reconoce los términos pasado y presente, como términos no intercambiable. Partiendo de esta valoración, se propone la exigencia del respeto y de la conservación del monumento como valor formal e histórico de actualidad permanente*

<sup>1447</sup> ANTIGÜEDAD, M<sup>a</sup> Dolores; AZNAR, Sagrario *El siglo XIX. El cauce de la memoria*. Istmo, colección Fundamento, 131, Madrid, 1998, p.24.

tratadas.<sup>1448</sup> El legado patrimonial, al igual que todas las manifestaciones de la creatividad humana, va a tener una lectura profana que sustituirá el fundamento religioso o de exaltación monárquica. El Patrimonio se convierte en un instrumento vital en el proceso de secularización de la sociedad que propugna los enciclopedistas, dentro del marco general de la misión pedagógica que se le ha asignado al arte. Las obras de la Antigüedad excavadas y descubiertas en este momento saldrán a la luz a través de innumerables exposiciones que no solamente incitará a una apertura pública del conocimiento del legado del pasado, sino a una verdadera concienciación patrimonial, convirtiéndose en un precedente inmediato del papel que significó posteriormente la Revolución Francesa. La delimitación del pueblo como comunidad insertada en las tesis políticas de la Ilustración estará marcada por la búsqueda de una identidad de unidad, que con el tiempo el legado patrimonial será uno de sus instrumentos. Con la crisis del mundo de la Ilustración se abre una nueva etapa cultural en el valor de lo antiguo, al superarse esa concepción de universalismo de estirpe clasicista que había impregnado Europa en las sociedades del Antiguo, por una revisión conceptual reflejado en el pensamiento piranesiano, donde como apunta Ignacio Henares Cuellar *la historia y la naturaleza van a dejar de pertenecer definitivamente a los dominios de lo arcádico, al adorno cortesano y la emblemática convenida, para sumergirse en una nueva realidad ideológica: las ruinas se reclaman para Piranesi por una parte como un argumento para reivindicar los valores políticos-morales de la Antigüedad, y por otra como manifiesto de los fueros del genio, los fueros de la originalidad en el ámbito de la creación artística.*

### **3.1.2. Las colecciones regias como bien de interés público en la segunda mitad del siglo XVIII: de la privacidad de los bienes históricos-artísticos a la apertura pública de las galerías reales.**

---

<sup>1448</sup>Juan Calatrava puntualiza como *la relativización del papel de guía de Grecia y Roma para la cultura moderna y la quiebra del exclusivismo clasicista y de la mitificación del legado de los Antiguos es unánimemente reconocida como uno de los más importantes de entre los numerosos hilos que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, se entrecruzan para dar origen a la nueva cultura europea. Cuando la generación de los enciclopedistas declaro obsoleta la vieja Querelle des Anciens et des Moderns ella abrió la vía, por más que siguiera declarando su admiración por Grecia y Roma, a un proceso imparable de revisión de la Historia, en el seno del cual dicha admiración por lo grecorromano tuvo que ir poco a poco habituándose a coexistir con dos ideas hasta entonces poco habituales. La primera de ellas era de que no todo en Grecia y Roma era digno de ser imitado (...) la segunda, fue la de la entrada en la historia, con pleno derecho, tanto de pueblos ajenos a la tradición clásica (egipcios, hebreos, orientales, pueblos del Norte) como periodos de oscuros de los propios griegos y romanos. El nuevo interés por el primitivismo en todas sus variantes es, sin duda alguna el marco ideológico-estético en el que se inscriben fenómenos como (...) la etruscomanía o la propia egiptomanía.* CALATRAVA, Juan *Arquitectura y cultura en el siglo de las Luces*, Universidad de Granada, 1999, pp.179-181.



Durante la segunda mitad del siglo XVIII las colecciones regias van a sufrir una transformación jurídica en el seno de los derechos patrimoniales, al convertirse de meros bienes pertenecientes a una colección privada a identificarse como bienes de interés público. La Monarquía Absolutista había seguido siendo la gran coleccionista de obras de arte, así como el gran mecenas de la producción artística. Sería en el ámbito cortesano donde se iría formalizando colecciones de objetos históricos y artísticos que tenían como objeto resaltar la fastuosidad de las Cortes Reales, por lo que eran bienes que se identificaban con la institución monárquica y cuya tutela pertenecía a la propia Monarquía, mostrando en cierta forma una concepción pública. Siguiendo los términos de Aurora León *La victoria del absolutismo monárquico en Francia seguido de la pujanza económica de la aristocracia vaticana y romana y la antigua nobleza mezclado con los burgueses "titulados" y ennoblecidos fueron las causas principales que desencadenaron un coleccionismo y de calidad (...)* *La Monarquía ejerce una triple acción totalizadora sobre el mercado del arte y el coleccionismo: 1º) Imponer el estilo de la corte, estilo que es asumido por la burguesía; 2º) mantener el monopolio de la educación artística (Colbert, al ser nombrado director nacional de las Bellas Artes, dirige autoritariamente la Academia Real de Pintura y Escultura basándose en ser institución estatal, subvencionada por el Rey y manipulando el arte como instrumento del Estado, y 3º) hacer de la producción artística una organización estatal. Este coleccionismo selecto tendría sus comienzos en las adquisiciones (libros y obras de arte) de Richelieu, quien también se apropia de las mejores obras de la colección de Mazarino (hoy en la Biblioteca Nacional de París)*<sup>1449</sup>. La Corte de Luis XIV representa el modelo del monarca coleccionista de antigüedades, siguiendo la tradición coleccionista de los reyes franceses, como había sido el caso de Francisco I, cuyas piezas estaban ubicadas en su palacio de Fontainebleau. El Rey Sol trasladaría dicha colección al Palacio del Louvre, uniéndose con las adquiridas bajo su reinado especialmente con la compra de las obras pertenecientes a la Monarquía Inglesa, que habían sido puestas en venta tras la muerte de Carlos I en 1649, y de la colección del banquero francés Jabach, debido a las dificultades financieras en que estaba inmerso. A estas se unirían las dos colecciones que fueron regaladas al Rey, la del cardenal Mazarino y la del abad de Marolles. A finales del reinado de Luis XIV estas colecciones se trasladarían a Versalles, que se convierte en el modelo del coleccionismo regio y de la alta nobleza, y todo lo que evocase, versallismos, rocallas y chinoisseries tenía un valor incontestable en el mercado y un éxito de furor en las colecciones privadas. La colección regia forma parte de los bienes privados del Monarca en el ámbito del absolutismo, no se vincula por consiguiente en un principio a la Corona, e incluso no se procede a exponerse públicamente, sino que solamente serán conocidas por aquellos privilegiados que puedan tener por un permiso especial acceso al mismo. Carlos Duncan puntualiza cual era la funcionalidad pública

---

<sup>1449</sup> LEÓN, Aurora *El Museo. Teoría, praxis y utopía. Cuadernos Arte Cátedra*, 2000, pp.32-33.

de estos bienes identificativos de la exaltación monárquica: Normalmente las galerías reales se utilizaban como salón de actos, lo que proporcionaba un entorno suntuoso para las ceremonias oficiales y como marco para la figura del gobernante. En el siglo XVIII era ya práctica habitual en Europa instalar las colecciones reales en salas profusamente decoradas en la que a menudo se encajaban trabajos aislados en complejos diseños de paredes labradas y doradas. El objeto de tal ostentación era deslumbrar y sobrecoger tanto a los visitantes extranjeros como a los dignatarios locales con la magnificencia, el lujo y el poder del soberano y, a menudo, mediante iconografías especiales, manifestar el derecho o la legitimidad de su autoridad. Las estancias de los palacios y las galerías también podían estar decoradas con series iconográficas que proponían halagadoras similitudes con el poderoso: retratos de legendarios emperadores o descripciones de las hazañas de grandes monarcas del pasado (...) De un modo u otro, la exhibición de objetos y pinturas tenía un objetivo: demostrar el esplendor, la legitimidad o la sabiduría del príncipe<sup>1450</sup>. Con el mismo ansia coleccionista, otros monarcas europeos fueron adquiriendo sus colecciones artísticas, como los Habsburgo en Viena, que tienen como precedente la gran colección de Maximiliano I de Austria (1459-1519), la de los Wittelsbach en Munich, de los Hohenzollers en Berlín, de los Borbón-Parma en Nápoles o de los Romanoff en San Petesburgo<sup>1451</sup>.

Durante la etapa de la Ilustración se va a producir un hecho primordial en el ámbito del coleccionismo regio, la transformación del carácter privado del coleccionismo regio al abrir al público, aunque todavía muy selecto, al surgir, como apunta María Bolaños una corriente de opinión, encabezada por todo tipo de intelectuales y artistas europeos que reclamaron el acceso al público de las colecciones privadas, especialmente las colecciones reales, entendiéndose como un derecho de la nación a conocer e incluso a poseer el patrimonio de la monarquía, que verán en las antigüedades un reflejo no solamente de la exaltación del poder de la Monarquía sino de su propia identidad como pueblo vinculado con su Rey, abriendo camino de una identidad histórica que defina una verdadera concienciación pública de los bienes. Esta aspiración, formulada en Francia y pronto extendida por toda la Europa ilustrada, se entendía como un derecho de la nación a conocer (y también a poseer, aunque éste era un secreto deseo) el patrimonio artístico de sus reyes. Los fundamentos de la defensa de este aperturismo público de las colecciones regias serán variados, puntualizando Bolaños la importancia, *en un periodo de gustos neoclasicistas, de conocer las obras ejemplares de los grandes maestros antiguos y de aprender directamente de ellos; la urgencia de preservar las obras de su deterioro, encerradas y amontonadas en sótanos insalubres y oscuros; y*

<sup>1450</sup> DUNCAN, Carol, *Rituales de civilización*, Murcia, Nausicaä, 2007, p.24.

<sup>1451</sup> BAZIN, G. *El tiempo de los museos*, Madrid, 1969, p.23.

*finalmente, la más halagadora de las razones: la convenciencia de mostrar a los visitantes extranjeros las grandezas de la propia nación*<sup>1452</sup>.

La Galería Real se va a abrir a un público selecto, va a poder ser apreciado por los súbditos, y se va a ir identificando una conexión entre los intereses estatales de las colecciones regias y la de los propios súbditos, naciendo de este modo la génesis de lo que se ha denominado la Museografía moderna. Sería a partir de 1700 cuando algunas importantes colecciones privadas como la Galería Imperial de Viena o el del Quirinal en Roma comenzarían a admitir un público visitante. De la misma manera el historiador Aloys Hirt reclama en Berlín al rey de Prusia en 1798 el carácter público del patrimonio con una función social y pedagógica clara: *Las colecciones (...) constituye un patrimonio de toda la humanidad (...) Sólo poniéndolas al alcance del público pueden convertirse en objeto de verdadero estudio, de manera que, con cada ventaja obtenida de esa forma, se obtiene una nueva ganancia para el bien común de toda la humanidad. Solo poniéndolas al alcance del público pueden convertirse en objetivo de verdadero estudio, de manera que, con cada ventaja obtenida de esta forma, se obtiene una ganancia para el bien común de toda la humanidad*<sup>1453</sup>. Nuevamente Francia va a ser el verdadero modelo de la política tutelar de las colecciones regias, ya que comenzaría a considerarse a la galería privada del rey como merecedora de ser conocida por sus súbditos, como exponentes de la grandeza del Monarca, que a su vez simbolizaba a la Nación. De esta manera en 1750 Luís XV decidió enviar 110 pinturas al Palacio de Luxemburgo de París, que sería abierto dos días por semana. Aunque Madame Pompadour presionaría al Rey para que la colección fuera mostrada regularmente al público, los cortesanos se opusieron a la idea y el palacio terminó cerrándose. Diderot en su artículo Louvre, perteneciente al Tomo IX de la Enciclopedia de 1765, presentaría un proyecto en el que el palacio del Louvre debía de acoger las colecciones regias a modo de templo de las artes y de las ciencias con el fin de ser expuestas al público, idea que por cierto ya aparecería reflejada en un libelo publicado en Holanda en 1747 firmado por La Font de Saint Yenne, *Refléxions sur quelques causes de l'état present de la peinture en France*, en la que se reclamaba la observación pública de las colecciones privadas de sus Majestades<sup>1454</sup>. Ya en 1778 se piensa seriamente en la creación de un museo de escultura y pintura con los fondos privados de la Monarquía, por lo que finalmente las obras son trasladadas al Louvre, siendo el conde D'Angivillier, director con Luis XVI de las Construcciones Reales el que comenzaría las gestiones para ello, pero que serían truncados posteriormente con los problemas políticos que culminarían definitivamente en el proceso

---

<sup>1452</sup> BOLAÑOS, María Ideales ilustrados, prácticas burguesas: La génesis intelectual del museo público en *Mus-A* Año I, Nº 2, julio 2003, p.91.

<sup>1453</sup> BAZIN, G., 1969, p.153.

<sup>1454</sup> BOLAÑOS, María "Ideales ilustrados, prácticas burguesas: la génesis intelectual del museo público". *Mus-A Revista de Instituciones del patrimonio histórico de Andalucía*. Año I, nº 2, julio, 2003, p.90

revolucionario. Siguiendo el modelo francés, el emperador Carlos VI de Austria encargaría al conde Althon realizar una exposición sobre las colecciones de la Corona, entre 1720 y 1728 en el edificio de Stallburg. Entre 1750 y 1779, se expondría públicamente un gran número de cuadros pertenecientes a la Monarquía francesa en el Palacio de Luxemburgo, siguiendo los consejos de eruditos como Voltaire y Diderot. De la misma manera la monarquía británica en 1759 apoyará la fundación de un museo público de carácter nacional basado en el legado de Hans Sloane, La apertura definitiva en 1772 al público de la colección de antigüedades del museo Pío Clementino sería un factor determinante en la actitud de otras monarquías europeas, como la de Felipe II de Prusia que mostrara en público sus objetos artísticos que estaban ubicados en su palacio de Sansouci en Postdam o la de los Habsburgo que abren por primera vez sus colecciones públicas en 1784 el castillo del Belvedere de Viena. Ya en 1778, por iniciativa de José II, se centralizarían las colecciones imperiales en el Palacio de Belvedere, con el objetivo de que fuera expuesto al público, que solo podían acceder tres veces por semana<sup>1455</sup>.

En el caso de la Galería de los Uffizi podríamos encontrar ya una ruptura del carácter patrimonialista del coleccionismo regio, al concebirse una nueva visión tanto en el modelo expositivo como en la funcionalidad social en que esta inmersa. Como apunta Annamaria Petrioli Toffani como la colección fue situada en *un edificio de carácter público y pensado para exponer de forma no casual testimonios culturales cuidadosamente seleccionados, una expresión concreta –la primera en la historia de la civilización europea- de la primera idea de museo. En efecto, los objetos exhibidos en tal contexto perdían su condición de pertenencia a una colección particular para asumir el más importante papel de productos de pensamiento y de instrumentos cognocitivos. Por otra parte, dichos objetos entraban aquí en el circuito de una nueva visibilidad, de alcance inédito (aunque todavía no público a todo los efectos), ya que no sólo se permitía visitar la Tribuna a los huéspedes ilustres de la familia reinante, sino también a todos aquellos –estudiosos, artistas, viajeros y hombres de cultura- que solicitaban permiso para hacerlo. Es evidente que con una iniciativa de este tipo los soberanos toscanos aportaron una notable contribución a su imagen y a su prestigio dinástico. El éxito obtenido fue tal que se tomó la costumbre de trasladar a los Uffizi, retirándolas de las residencias particulares, las obras más prestigiosas que se iban localizando (...)*<sup>1456</sup>. El príncipe elector, Carlos Teodoro, que reinó entre 1777 y 1799, asumiría el gobierno de los dos principados, con Munich como ciudad residencial, creando en su calidad de príncipe ilustrado una nueva concepción de la colección artística que había llegado a su poder a través del coleccionismo privado de sus antepasados, por lo que le animó a construir una Galería de Arte, muy próxima a la residencia del príncipe elector, mostrando en la sala unas setecientas

<sup>1455</sup> BAZIN, G., 1969, p.170.

<sup>1456</sup> TOFFANI, Annamria Petrioli *Galleria degli Uffizi, Florencia, Los grandes museos historicos, Edicion conmemorativa del 175 aniversario del Museo del Prado.*

pinturas, paso decisivo que convertía una cámara artística en una galería pública. Con el tiempo nacería la Alte Pinakothek de Munich, uno de los museos más importantes de Europa. Ya más tardíamente podemos citar la Orden de 29 de marzo de 1810 del rey Federico III por la que se creó la colección de bienes artísticos de carácter público con el objeto

### **3.1.3. La regulación del Patrimonio Monumental en la Italia Preunitaria.**

#### **- Las disposiciones del Papado sobre tutela del Patrimonio Monumental.**

Los inicios de una verdadera concienciación pública del Patrimonio Histórico-Artístico y una acción tutelar directa por el propio Estado en relación a su protección jurídica siguiendo la tradición historiográfica lo podemos situar en la acción que el Papado desde el Renacimiento había desarrollado en aras de conservar y rehabilitar la grandeza imperial de los vestigios monumentales que habían pervivido de la Ciudad Eterna. Mario Speroni delimita un verdadero modelo pontificio en el ámbito de la protección del Patrimonio Histórico-Artístico, especialmente orientado a evitar la dispersión de las colecciones artísticas romanas y la extracción del territorio de piezas de valor artístico o arqueológico<sup>1457</sup>. Los sucesivos edictos papales que van a ir apareciendo desde el Renacimiento hasta bien entrado el siglo XVIII ampliaran sucesivamente el plantel de bienes a tutelar, y una cada vez mayor intervención pública en la modalidad protectora sobre el Patrimonio Histórico-Artístico, teniendo siempre con línea de actuación primordial las llamadas técnicas represivas por lo que se limitaba el derecho del propietario privado<sup>1458</sup>. Sin embargo, a pesar de esta amplia normativa, debemos señalar dos hechos que van a marcar los límites de la regulación papal, actitud que podemos encontrar en las monarquías absolutistas del siglo XVII y XVIII: 1º) La selección patrimonial de los bienes a proteger será muy escasa, ya que se van a reducir a obras arquitectónicas pertenecientes a la Antigüedad Clásica. Al mismo tiempo que se intenta proteger bienes se destruyen otros no considerados dignos de conservarse. 2º) La concepción patrimonialista de la protección monumental, al no tener una clara voluntad por parte del Papado de dotar de una configuración pública al Patrimonio protegido, sino que su fundamento se centrará en la exaltación de la institución pontificia e incluso de la propia Ciudad Eterna.

Sería imposible recopilar en este trabajo la producción normativa sobre el Patrimonio realizado por el Papado durante la etapa del Renacimiento. Aunque ya durante los pontificados de Martín V (1417-1431) y Eugenio IV (1431-1447), se promulgaron una serie de normas conservar el patrimonio

---

<sup>1457</sup> SPERONI, Mario La tutela dei beni culturali negli Stati italiani preunitari, I. L'età delle riforme, Giuffrè, Milan, 1988.

<sup>1458</sup> RIDLEY Ronald T. To protect the Monuments: The Papal Antiquarian (1534-1870). *Xenia Antiqua*, 1, 1992, pp.117-154.

religioso conservado en Roma, las primeras medidas proteccionistas lo podemos encontrar en la bula de Pío II Piccolomini *Cum alman nostram urbem* de 1462, en la que se prohibía que los monumentos antiguos de la ciudad de Roma bajo pena de excomunión que *se utilizara como material para la construcción de nuevos edificios, a todos, religiosos o laicos sin excepción, cualquiera que sea su poder, su dignidad, su estatus o su rango, cualquiera que sea el lustre eclesiástico (incluso pontifical) o mundano con el que estén adornados, demoler, hacer pedazos, dañar o convertir en cal, directamente o indirectamente, pública o secretamente, todo edificio de la antigüedad o todo vestigio de los edificios antiguos existentes sobre el suelo de dicha ciudad o en sus alrededores, incluso si se encuentran en propiedades que les pertenecen en la ciudad o en el campo*, incluyendo una serie de multas para aquellos que atentaran contra los propios monumentos, especialmente a todos los artesanos o a los obreros que han sido sorprendidos en flegante delito de demolición o de degradación, así como a aquellos en cuyo nombre actuaron, por lo que incluso se podría aprionar a los infractores, confiscar sus animales, sus instrumentos y otros bienes, forzarlos a pagar sus multas. Nadie podría derogar ninguna de estas medidas, a excepción del propio Papa, siendo necesariamente que hacerlo mediante una bula o un informe apostólico. Su sucesor, Sixto IV promulgaría en 1474 la bula *Cum pròvida* de Sixto IV, de 1474, normas que nacen por la necesidad de recuperar la ciudad de Roma que había sido devastada con las invasiones bárbaras y abandonada durante el exilio del Papado en Avignon<sup>1459</sup>.

Consciente de la importancia de los vestigios patrimoniales que Roma conservaba, durante todo el siglo XVI los Papas van a proseguir promulgando una amplia normativa proteccionista, en un momento por influencia de los ideales del Humanismo desarrollado en Italia, nace una nueva valoración de la obra de arte. Aunque no alcanzó un matiz jurídico, cabe mencionar el documento testimonial que hoy constituye las Cartas que Rafael enviaría al Papa León X hacia 1516 con motivo del encargo de elaborar un mapa de la Roma monumental, en el que el artista italiano se lamenta del estado lamentable en que estaba inmerso la urbe italiana, por lo que incitaba a la autoridad pontificia a que promulgara normas de protección sobre aquellos vestigios monumentales del pasado que peligraba su existencia, verdadero alegato a una intervención pública sobre los bienes histórico-artístico, por lo que cabe recoger algunos fragmentos, donde se plasma ya una primera concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico: *Toda esta nueva Roma que vemos actualmente, en su grandeza y en su belleza, con sus palacios y sus iglesias, ha sido enteramente edificada con la cal proveniente de mármol antiguo. Yo no sabría pensar sin profundo dolor en que, desde mi llegada a Roma, no hace aún doce años, tantos bellos monumentos han sido destruidos*

<sup>1459</sup> CONDEMI, S. *La salvaguardia dei beni culturali: lineamenti di storia della tutela*, Istituto per l'arte e il restauro palazzo Spinelli, Firenze, 1997, p.15.



(...)<sup>1460</sup>. Paolo III (1534-1549) publicaría el 28 de noviembre de 1534 un breve en el que defendía la protección de los monumentos, siendo nombrado el propio Rafael encargado de la inspección de todas las excavaciones y de todos los descubrimientos de piedras y de mármol que desde ahora se hará en Roma y en una circunferencia de diez millas (...). Solamente con la licencia pública concedida por el Vaticano se podrá adquirir antigüedades clásicas por lo que nos encontramos con una de las primeras medidas limitativas de exportaciones de obras de arte<sup>1461</sup>. En el pontificado de Sixto IV (1471-1484) se volvería a publicar un breve en el que se prohibía la exportación de obras de arte<sup>1462</sup>. Al mismo tiempo que se desarrollaba esta amplia producción normativa se promovió una verdadera política de restauración de monumentos, aunque en este caso como apunta Francisca Hernández Hernández se daría la paradoja de utilizar algunos materiales de los monumentos antiguos en la reconstrucción de otros, dilema que abriría un verdadero debate científico en plena etapa humanista.

Con el Pontificado de Urbano VIII Barberini se inaugura una política de tutela de las antigüedades que va a proseguir durante toda la etapa del Barroco. Probablemente sea el **edicto de Aldobrandini, prohibitione sopra l'estrattione di statue di marmo o di metallo figure, antichità e simil, de 1624**, el primero de la larga nómina de disposiciones que abre el camino a una específica protección del patrimonio arqueológico. Se establecía todo un procedimiento administrativo en torno a la excavación arqueológica, especialmente en el caso de adquisición del bien encontrado, que debía ser denunciado a las autoridades pontificas pertinentes: *Inoltre ordiniamo e commandiamo che cavandosi in luogo alcuno con la debita Nostra licenza, e trovandosi Statue, o alcuna delle cose sudette, o qualsivoglia altra cosa si di qualsivoglia pietra, come di qualsivoglia metallo, debbano il patroni del luogo dove si sarà cavato, il cavatori, et altri che ne haveranno notizia, o almeno uno di loro, haverlo denunziato in termine di 24 hore a Noi o al nostro Auditore, o ne gli atti dell'infrascritto Nostro Notaro, e quelle trattenere da farne esito, donare, o vendere per quattro giorni dopo la denuncia; sotto le medesime pene, e se saranno cavatori, oltre le dette pene di tre tratti di corda, a lo que se unía la pertinente sanción penal en caso de infracción por parte del descubridor de los bienes: Avertendo ognuno a non contravenire, perche contro gl'inobedienti si procederà alle sudette pene con ogni rigore non solo per inquisitione, ma si starà alla semplice relatione d'un testimonio degno di fede. Volendo inoltre che le prove fatte fuori dello Stato valgino, e provino contro i trasgressori. Esta norma sería completada durante el pontificado de Inocencio XII (1691-1700), con la promulgación del Edicto del Cardenal Altieri, el **Editto contro quelli, che chaveranno, o guasteranno***

---

<sup>1460</sup> MARTINEZ Justica, M<sup>a</sup> José, pp.82-84.

<sup>1461</sup> JESTAZ, M.B. L'exportation des marbres de Rome de 1535 á 1571 en *Melanges d'Archeologie et d'Histoire*, LXXV, 1963.

<sup>1462</sup> MÜNTZ, M.E. Les Arts a la Cour des Papes pendant le XV et de XVI Siécle. Première Parte. Martín V-Pie II.1417-1464, París: Ernest Thorín, 1878,

**edifizj antichi, e loro platte, e pozzolana con burbore**, del 9 de mayo de 1685. Se abría con ella la tutela pública del patrimonio arqueológico, como se deduce la lectura de este fragmento: *Per tanto per ordine della Santità di Nostro Signore datoci a bocca, e per l'autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato non revocando, ne recedendo dall'altri Bandi sopra ciò publicati, ma quelli confermando, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, o condizione, che per l'avvenire non possino, nè debbano sotto qualsivoglia pretesto, nè per vigore di qualsivoglia Patente, o licenza da Noi, o da qualsivoglia altra persona concessa, etiam sotto pretesto di cavar tesori, o statue, cavare, ne far cavare in qualsivoglia luogo, e sitto tanto publico, quanto privato dentro, e fuori delle mura della Città, nè qualsivoglia parte, etiam minima vicino allí detti edifizj antichi, e vestigj di essi per canne cinquanta, e meno detti edifizj, e antichità, e platee di essi rompere, guastare, e diminuire, ne li travertini, o altra materia diruta, e devastata portar via.*

Durante el siglo XVIII seguirán promulgándose un amplio número de edictos limitando el comercio de obras de arte, iniciándose en el pontificado de Clemente XI Albani (1700-1721), auténtico mecenas del arte, con la promulgación de dos edictos, bajo los auspicios del camarlengo, el cardenal Spinola, una el 18 de julio de 1701, ***De proibizione sopra l'estratione di statue di marmo o metallo, figure, antichità e simili***, a la que se uniría la del 30 de septiembre de 1704, el ***Editto sopra le pitture, Stucchi, mosaici, et altre antichità; che si trovano nelle cave, iscrizioni antiche, scritture, e libri manoscritti***. En este último se instaura una verdadera licencia administrativa para poder excavar, con la incorporación de una verdadera normativa penal en caso de infracción: *Che ritrovandosi sotto Terra nelle Cave, che si fanno, e faranno in avvenire con le debite licenze, Pitture, Stucchi, Pavimenti, Figure, o altri lavori di Mosaico, Monumenti, o sian Sepolcri di qualsivoglia sorte, si debbano subito denunciare al nostro Commissario delle Antichità, o sia Antiquario, che ora è Francesco Bartoli, nè pessano guastarsi, e demolirsi senza la licenza, ch'egli darà gratis a nome Nostro, doppo d'aver fatto il disegno di quelle cose, che non si potranno conservare; Dichiarando che quest'ordine debba comprendere, et ettivamente comprenda non solo li Cavatori, Muratori, et altri Operarij, ma ancora il Padroni del Fondo, Affittuarii, Vignaroli, et ogn'altra persona interessata nella Cava, sotto pena di scudi 100 da applicarsi per la metà alla Reverenda Camera Apostolica, e per l'altra metà all'Accusatore, e anche sotto pena corporale da stendersi a pena grave afflittiva del corpo a nostro arbitrio secondo la qualità de casi, e delle persone.* Un edicto posterior, el del **8 de abril de 1717**, se proseguiría la regulación sobre la exportación de obras de arte, incluyéndose la obligatoriedad de la licencia administrativa pertinente: *senza Nostra licenza, como pure ordinato in altra consimile Proibizione publicata li.8 Aprile, 1717 nel S 2.e. qual licenza, quando sarà di cave di Tavolazze, Peperini, Travertini, ed altre simili rustiche materia, dovra riceversi dall'Offizio delle Strade, como sino al giorno di oggi si e praticato; proibiendo al modessimo Offizio, e suoi Sostituti fare qualunque altra sorte di licenze: e quando riguardera cave di Statue, Marmi, &c. e di*

*ogni altra estrazione di Quadri &c. vogliamo, che tutte spettino, e spettar debbano a' Nostri soliti Segretarj di Camera. Oltre le sudette licenze, vi dovra intervenire il Commisario, o pure l'Assessore in quel modo, che da Noi si giudichera piu opportuno, od altri ancora in loro luogo da deputarsi da Noi.* Con el Papa Benedito XIII (1724-1730) se seguiría la trayectoria de la política cultural del Papado, especialmente a la hora de incrementar las colecciones del Museo Capitolino, concretamente la colección de estatuas clásicas. Sería en esta etapa cuando el cardenal Alessandro Albani, gran aficionado a las antigüedades, promulga el Edicto **relativo agli scalpellini, segatori di marmi e cavatori de 21 de octubre de 1726**, por el que se prohibía cualquier acción de mutilación y aprobación impropia sobre las antigüedades encontradas<sup>1463</sup>.

Papado	Disposiciones Normativas	Fecha de promulgación
	Bula Piccolomini Cum alman nostram urbem	28 de abril de 1462
Pío IV.	Bula Dei ad futuram ei memoriam. Providence contra gli toglieva i marmi, ed altri Monumenti di Antichità dalla Chiese di Roma	7 de abril de 1474
Pío IV	Deputatio Conservatorum Antiquitatum Urbis.	1562
Gregorio XIII,	Edicto De officio Conservatorum.	17 de mayo de 1580
Urbano VIII Barberini	Edicto prohibitionem sopra l'estrazione di statue di marmo o di metallo figure, antichità e simil.	5 de octubre de 1624.
Inocencio XII (1691-1700)	Edicto contro quelli, che chaveranno, o guasteranno edifizj antichi, e loro platte, e pozzolana con burbore	9 de mayo de 1685.
Clemente XI Albani (1700- 1724)	Edicto del Cardenal Spinola, De proibizione sopra l'estrazione di statue di marmo o metallo, figure, antichità e simili	18 julio 1701
Clemente XI Albani (1700- 1724)	Edicto sopra le pinture, Stucci, mosaici, et altre antichità; che si trovano nelle cave, iscrizioni antiche, scritture, e libri manoscritti	30 de septiembre de 1704
Benedito XIII (1724-1730)	Edicto del cardenal Albani relativo agli scalpellini, segatori di marmi e cavatori	21 de octubre de 1726
	Edicto proibizione di estrarre antichità del Cardenal Albani	10 de septiembre de 1733
Benedicto XIV (1740-1758)	Editto proibizione della Estrazione delle Statue di Marmo, o Metallo, Pitture, Antichità, e simili del Cardenal Valenti	5 de enero de 1750

<sup>1463</sup> CASTRACANE, MARCOS Gli italiane l'arte, 2011, p.68.

Clemente XI Albani (1700- 1724)	Editto	8 abril de 1717
---------------------------------------	--------	-----------------

Durante el pontificado de Benedicto XIV (1740-1758) se culminaría la configuración del sistema normativo de la tutela del Patrimonio Monumental. Como apunta María Andaloro *la vendita di opere d'arte a Roma costituiva un balsamo per sanare le difficoltà economiche in cui versavano alcune famiglie aristocratiche: questo commercio, associato anche al traffico di reperti archeologici rinvenuti grazie agli scavi clandestini, rischiava però di impoverire la città del suo patrimonio storico artistico, tanto che provocò provvedimenti sul piano normativo con la stesura di importanti testi di legge*<sup>1464</sup>. Sería el camarlengo Cardenal Silvio Valenti Gonzaga (1690-1756), poseedor de una de las grandes colecciones romanas<sup>1465</sup>, quien promulgaría el **Editto proibizione della Estrazione delle Statue di Marmo, o Metallo, Pitture, Antichità, e simili. 1750, 5 de enero**. Serían renovadas todas las disposiciones normativas que habían sido promulgadas desde el 5 de octubre de 1624 al 10 de septiembre de 1733: *Onde inerendo Noi alia suprema Volontà di Sua Beatitudine, ed in virtu del Nostro Ufficio di Camarlengato, rinnovando, e confermando in primo luogo gli Editti pubblicati da Nostri Antecessori sopra la proibizione di estrarre dalla detta Città di Roma, e dallo Stato Ecclesiastico le cose predette, ed altre piu individualmente espresse nei mentovati Editti, cioè delli 5 ottobre, 1624, 29, Gennajo 1646, 30 agosto 1655, 5 febrajo 1686, 18 luglio 1701, 8 aprile 1717, 21 ottobre 1726, e 10 settembre 1733, proibiendo tanto a personas eclesiásticas como cualquier secular di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ancorché richiedesse specialissima menzione, che non possa, ne presuma per l'avvente estrarre, e far estrarre fuori di Roma*. Al mismo tiempo introducía de manera minuciosa una gran variedad de bienes muebles que serían considerados por su valor histórico y artístico: *sorte alcuna di Statue, Figure, Bassirilievi, Colonne, Vasi, Alabastrì, Agate, Diaspri, Amatiste, ed altri Marmi preziosi, Gioje, e Pietre lavorate, Dorsi, Teste, Frammenti, Pili, Piedestalli, Iscrizioni, o altri Ornamenti, Fregi, Medaglie, Camei, Corniole, Monete, o Intagli di qualsivoglia materia antica, o moderna, ne meno Figure, Quadri, Pitture Antiche, o altre Opere in qualsivoglia cosa scolpite, e dipinte, intagliate, commesse, lavorate*. Daría una mención especial al patrimonio arqueológico, al establecerse la obligatoriedad de la concesión de una licencia *in quanto alle Cose rare, antiche, e di molto prezzo, e valore*. Ya se apreciaba como precedente de legislaciones posteriores, un tratamiento distintivo tutelar entre aquellos bienes que tenían una cierta antigüedad y las obras de autores modernos: *E perciò, che spetta al Quadri, ed ogni altra sorte di Pitture, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che tutti i Quadri, e Pitture antiche, e di ogni autore últimamente defunto con qualche riputazione, debbano esser soggette alle medesime Leggi, e condizioni delle Statue, e di ogni altra sorta di Antichità; essendo nostra precisamente, che nella estazione di questi si pratichi ogni rigore, e che si osservino le solite regole del Memoriale, visite, e spedizione delle licenze da farsi de uno*

<sup>1464</sup> Andaloro, María, *La Pinacoteca Capitolina nel Settecento: ordinamento e conservazione*, Università degli studi e la Valorazione dei Beni Storici e Artistici, p.13.

<sup>1465</sup> Silvio Valenti Gonzaga e il mercato artistico romano del XVIII secolo, 2005.

*de 'Segretari di Camera. Ma per tutti quei Quadri, e Pitture moderne non eccedenti il valore di scudi cento, e che si vogliano trasportare fuori di Roma per comodo delle vicine Ville, e nello State Ecclesiastico, ad anche fuori, ad effetto di dare maggiore incitamento ai Professori, ad alla gioventú, che si applica a questa nobil Arte, bastera il semplice attestato dell'Assessore coll'approvazione del Comisario, da farsi appie della suplica, con che da Noi, o dal Nostro Monsignor Uditore se gli concederà la licenza per rescritto, e gratis in tutto.* En 1764 el Papa Clemente XIII (1758-1769) nombra a Winckelmann (1717-1768), superintendente de las antigüedades de Roma. Durante los pontificados de Clemente XIV (1769-1774) y Pío VI (1774-1799), sería nombrado Giambatista Visconti, debiéndose el primero la fundación del Museo Vaticano.

**- Toscana.**

Toscana	Disposiciones Normativas	Fecha de publicación
Cosme de Medici (1537-1574)	Legge contra chi rimovese o violasse armi, inscrittioni o memorie esistenti apparentemente negli edifitti cosi' pubblici come privati	30 de mayo de 1571
	Deliberazione antichità	24 de octubre de 1602
	Deliberazione antichità	6 de noviembre de 1602
	Editto che proibisce l'esportazione di manoscritti, medaglie, statue.	26 de diciembre de 1754
	Bando che vieta di fondere o distruggere medaglie, monete ed altre anticaglie	17 de octubre de 1766
	Legge sugli scavi e su rinvenimenti di antichità	5 de agosto de 1780
	Legge proibita della estrazione di antiche pitture	30 de agosto de 1781
	Norme per la conservazione dei monumento di Volterra	18 de julio de 1744
	Dichiarazione dogonale di conferma al divieto di estrazione degli antichi dipinti	18 de octubre de 1791

Sería Cosme de Medici (1537-1574) quien inicie la regulación normativa de tutela del Patrimonio Monumental, indispensable para la exaltación de la identidad de la ciudad de Florencia, con la promulgación de la **Legge contra chi rimovese o violasse armi, inscrittioni o memorie esistenti**

**apparentemente negli edifitti così pubblici como privati** del 30 de mayo de 1571. La tutela de los bienes arqueológicos, se harían tanto a los de dominio público como privado, un camino de inicio a la hora de intervenir los poderes públicos en este sector normativo: *Che per virtù della presente Legge et Provisione in avvenire nissuna persona di qualsivoglia stato, grado o conditione ardisca o presuma in alcun modo rimuovere, cancellare o in tutto o in parte oscurare, o altrimenti offendere le Armi, Insegne, Imprese, Titoli, Inscrittioni, o altre memorie esistenti sopra le Porte, Finestre, Cantonate, Archi o altri luoghi di fuori apparenti di qual si voglia Palazzo, Casamento, Edifitio o Muraglia così publica come privata, ancorchè per qual di voglia causa havesse acquistato o acquistasse in l'avvenire il dominio o patronato di simile edifitio et muraglia posta tanto nella Città di Fiorenza quanto nel suo Contando et distretto, comprendendo ancora la Città Contado et Montagna di Pistoja et qualunque altra Città, Terra et luogo parimente privilegiato.* En la **Deliberazione Antichità del 24 de octubre de 1602** se establecería la lista de los nombres de los artistas que no podían ser vendidos, bajo la inspección de la propia Academia, entre los que se encontraban Michelangelo Buonarroti; Raffafelo de Urbino, Andre del Sarto, Mecherino, Il Rosso Fiorentino, Lionardo da Vinci, Il Francia Bigio, Perín del Vaga, Jacopo da Pontormo, Tiziano, Francesco Salviati, Agnolo Bronzino, Daniello da Volterra, F. Bartolomeo di S. Marco, Fra Bastiano del Piombo, Filippo di Fra Filippo, Antonio Corregio y Il Parmigianino, completándose unos días después con la publicación de la **Deliberazione Antichità del 6 de noviembre de 1602**, en las que se distinguirían la tutela pública entre artistas difuntos y artistas vivos.

Durante el siglo XVIII se desarrollaría una amplia normativa sobre el patrimonio arqueológico, donde ya se incluiría todos los problemas que conllevaban la regulación jurídica de las excavaciones arqueológicas. En el **Bando che vieta di fondere o distruggere medaglie, monete ed altre anticaglie de 1766** se establecería la obligatoriedad de comunicar todo descubrimiento de bienes de interés histórico y artístico: *che trovandosi a caso qualche tesoro, rispotiglio, o altro antico Monumento, l'inventore sia obbligato a subito denunciarlo a questo Regio fisco, o al Tribunale del luogo dove farà seguito tale ritrovamento, fa pubblicamente notificare, come resta proibito sì Ministri della Zecca, Orefici, Argentieri, a tutti i Fonditori & il fondere, e distruggere ogni sorta di Medaglie, Monere, o altre fimili anticaglie, senza prima notificarlo al Tribunale del Fisco direttamente, o per mezzo del Tribunale del luogo, sotto pena dell'arbitrio rigoroso, e della perdita delle cose suddette, e loro valuta, da aplicarli metà al Fisco, e metà al Delatore, o Accusatore palese, o fegrero.* Sería con la **Legge sugli scavi e su rinvenimenti di antichità del 5 de agosto de 1780** cuando se definiría una verdadera política institucional de tutela pública del patrimonio arqueológico, imponiéndose la obligación de otorgar licencia, *l'intraprendere Scavi per ritrovare, e ritrovati far propri Monumenti dei passati secoli, monete, o altra cose preziose antiche, pirchè volendolo fare nel suolo altrui, o estendovi il pericolo di danneggiare gli Edifizi, e Beni contigui ne abbia il consenso in scritto del Padrone del*



*fondo, o del Confinante, e adempia le condizioni sopra il reparto della roba trovata, o l'indennizzazione, e compisca ogni altro patto con cui il consenso li farà stato prestato (1).*

- *Nápoles.*

Nápoles	Disposiciones normativas	Fecha de publicación
Carlos III de Borbón	Prammatica LVII	24 de julio de 1755
Carlos III de Borbón	Prammatica LVIII	16 de octubre de 1755

En el reino de Nápoles la primera disposición tutelar del Patrimonio Monumental va a ser la **LVII Prammatica del rey Carlos III, del 24 de julio de 1755**<sup>1466</sup>, por el que se establece una rígida disposición normativa por el que se identifica la ilicitud de la venta de obras de artes con el contrabando: *A questo effetto mi ha comandato, che in suo Real Nome ordini, come fo, al Tribunale della Regia Camera, che publici Bando, che in ogni futuro tempo dovrà valere, così in questa Città, come per la Provincie, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione che sia, ardisca da ora in avanti estrarre, o fare estrarre o per mare, o per terra, dalle Provincia del Regno per Paesi esteri, qualunque monumento antico, cioè di statue, o grandi o piccole che sieno, di tavole, in cui caratteri sieno incisi, di medaglie, di vasi, d'istrumenti, ed ogni altra cosa antica, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o d'ogni altro metallo, senza che proceda l'espressa licenza di S.M.; e ciò sotto la pena della perdita della roba che s'estrae, e di anni tre di galera per gl'Ignobili, e d'anni tre di relegazione per li Nobili, e sotto la medesima proibizione d'estrazione, e pene, siano comprese le pitture antiche, o in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri. Comanda altresì la M.S., che intorno alla maniera di procederé contra i Contrawegnenti, pruova del delitto, e quando il medesimo s'intenda consumato, dovranno avere luogo le precedenti Leggi, colle quali l'estrazione è stata proibita, dichiarando in oltre che si avrà per consumato il delitto per mare, non solo quando le robe suddete si troveranno già imbarcate, ma anche allorchè si saranno ritrovate vicino le marine, i luoghi d'imbarco, in atto che si trasportano per imbarcarsi; E per terra, allorchè l'Estraente sarà ritrovato vicino il confini, o avrà voltate le spalle alle Regie Casse, in cammini, ed in circostanze tali, per cui verisimilmente si debba credere che le robe erano per estraersi dal Regno.* Una disposición posterior, **la Prammatica LVIII del 16 de octubre de 1755 de Carlos III**, completaría la regulación de obras de arte, por lo que ha voluto, de senza sua licenza fosse anche proibita l'estrazione di tutte le Reliquie d'antichità, o di statue, o di medaglie, o d'istrumenti, o di vasi, o di tavole, in cui caratteri sieno incisi, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o

<sup>1466</sup> CANTUCCI, Michele *La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico o storico*, Padua, 1953, p.15.

*di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tele, e tavole, di legno, di rame, o di argento, o tagliate da muri.*

**- Venecia.**

La República Veneciana durante todo el siglo XVIII vivió un momento de vitalidad restauradora de su patrimonio monumental, al ser consciente las autoridades políticas del papel que cumplía en la defensa de su identidad como pueblo. De esta manera entre 1727 y 1730 se promulga una amplia producción normativa, en la que se confiaba la vigilancia a eruditos. Cabe destacar que las primeras intervenciones estarían en manos de una empresa dirigida por el restaurador inglés Pietro Edwards, que tenía la obligación de cuidar de las pinturas de propiedad estatal, cuyo mantenimiento correría a cargo de la República Veneciana. Al mismo tiempo se fue concibiendo una verdadera institucionalización administrativa del Patrimonio Monumental, anteponiéndose en varios decenios a la administración monumental de los Estados Liberales, por lo que ya en 1773 se nombró un Inspector de Pinturas Públicas, que tendría como función primordial intervenir en aquellos bienes muebles que iban a ser restaurados, para lo que necesitaban una autorización oficial. A partir de 1778, sería creado al mismo tiempo el cargo de director de restauración de las pinturas públicas, que recaería en Edwards, desempeñándolo hasta su muerte en 1821. Cabe señalar que las técnicas de restauración que aplicaría en las composiciones pictóricas que le fueron designadas pertenecientes al Estado fueron radicalmente distintas a la del propio coleccionismo privado, por lo que podemos observar no solamente en el plano administrativo la diferencia que se va a producir entre lo público y lo privado en el ámbito tutelar. Debido a los traslados indiscriminados de los frescos conservados en los conventos suprimidos en la etapa napoleónica, se llevaría a cabo una política proteccionista como fue el caso del Decreto de 1818 de la Regencia Provisional del Gobierno Veneciano, por lo que prohibiría con fines comerciales: *No podrán efectuarse estos traslados si no se demuestra que el muro al que está adherida la pintura está en ruinas, o bien forma parte de algún edificio destinado a ser demolido o que la pintura puede sufrir daño si continúa estando sobre el muro y, finalmente, si no existe algún otro motivo grave que induzca a efectuar el traslado.*

**3.1.4. El Alvará Regio de 20 de agosto de 1721 como precedente de la tutela pública de carácter regio en el ámbito del derecho europeo.**

La historiografía jurídica del Patrimonio Cultural ha marcado como el verdadero precedente del sistema normativo del ámbito cultural la

promulgación del **Alvará Regio de 20 de agosto de 1721**, a instancia del rey Joan V, que posteriormente sería reeditado por el Decreto Real de (Alvará Regulo) de 1802<sup>1467</sup>. En el Preamble del Decreto que S. Magestade que Deos Guarde Foy férvido mandar á Academia em 13 de agosto de 1721, por la que Joan V mandó a la Real Academia de la Historia ya precisaba que *de ahora en adelante ninguna persona de cualquier estado, calidad y condicion, desechar o destuir en todo o en parte, cualquier edificio que muestra el tiempo es aún se debe en parte en ruinas y también las estatuas de mármol y lianas*. En 1720 se funda la Real Academia de la Historia, siendo uno de sus cometidos la conservación y creación de un inventario de monumentos históricos-artístico: *Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará de Lei virem, que por me representarem o Director e Censores da Academia Real da Historia Portuguesa (...) que procurando examinar por si e pelos Academicos os monumentos antigos que havia e se podiam descobrir non Reino*. Se impondría la obligación de *nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade e condicao que seja desfaça, ou destrua, em tempos, ainda que em parte esteja arruinado, e de mesma sorte as estátuas, mármore e cipos em que estiverem esculpidas algumas figuras, ou tiverem letreiros fenicios, gregos, romanos, góticos e arábicos; (...) como outrossim medalhas ou moedas que mostrarem ser daqueles tempos, nem dos anteriores, até o reinado do Senhor Rei Dom Sebastiao (...)*. Establece como responsabilidad institucional de la tutela del Patrimonio Monumental a las autoridades municipales, abriendo un verdadero precedente en las legislaciones liberales: *E encarrego as Camaras das cidades e villas deste Reino tenham muito particular cuidado en conservar e guardar todas as antiguidades sobreditas e de semelhante qualidade que houver no presente ou ao diante se descobrirem nos limites do seu distrito*.

### **3.1.5. La tutela del Patrimonio Monumental en el ámbito de la Monarquía francesa: un modelo a imitar en las cortes regias europeas.**

Sin duda alguna la Francia de la Monarquía absolutista se convierte en el paradigma de lo que Marcos Vaquer Caballería denomina con el término la cultura como política del Estado, por el que todas las manifestaciones de la creatividad humana, entre ellos las producciones artísticas van a ser instrumentalizado por el Estado, convirtiéndolas en parte de su propia identidad<sup>1468</sup>. El arte monárquico como exaltación de los valores del Estado en Francia como instrumento divulgador de la exaltación institucional ya es recogida en la obra de Charles Perrault (1628-1703), *La pintura, un poema*, publicada en 1668, donde ya relata como el ministro Colbert recibe el cargo de *surintendant et ordonnateur gèneral des bâtimens, arts, tapisseries et*

---

<sup>1467</sup> MAIA, María Helena, Patrimonio e Restauro no Século XVIII Portugues, en *Cuadernos ESAP* 2&3, Dezembro, 1997, pp.103-115.

<sup>1468</sup> VAQUER CABALLERÍA, Marcos *Estado y Cultura: La función cultural de los poderes públicos en la Constitución Española*, Editorial Centro de Estudios Ramón de Areces, Universidad Carlos III de Madrid, pp.34-35.

manufactures de France<sup>1469</sup>, que fue respaldado por el propio Rey como el propio Perrault recoge en su obra: *Vous pouvez, Messieurs, jouer de l'estime que je fais de vous*<sup>1470</sup>, considerándose el primer precedente de la Administración pública cultural y el primer paso para la publicación del patrimonio acumulado por el mecenazgo real. Bajo los auspicios de Richelieu surge en 1634 una institución vital para regir la administración artística del Reino, la Academia de Bellas Artes Francesa, quedando vinculada a la Corona, declarándose el rey protector de la misma, convirtiéndose en una institución más del Estado<sup>1471</sup>.

Durante los primeros años del siglo XVIII ya se va a desarrollar los primeros ensayos en la confección de un inventario de Antigüedades. Una obra temprana sería *las Mémoires pour servir à l'histoire des Maisons Royales*, de Felibien, y *Les Monuments de la Monarchie française*, de Montfaucon, publicadas entre 1729 y 1733. Cabe destacar que solamente aquellos bienes pertenecientes a la Monarquía o a la Iglesia eran incluidos en este inventario por lo que quedaban fuera del inventario los edificios privados. Dom Bernard du montfaucon, benedictino de la Congregación de Sain Maur, fue el primero en interesarse en formar un museo de historia nacional compuesto a partir de los relevés de monuments, fundamentado al mismo tiempo en dos obras primordiales en la evolución de la concepción del monumento en la segunda mitad del siglo XVIII: *L'Antiquité expliquée et représentée par les figures* (1719-1724), publicada en cinco volúmenes, y su obra capital, *Les Monuments de la Monarchie Française, qui compennent l'histoire de France, avec les figures de chaque règne que l'injure du temps a épargnées* (1729-1733), en cuya presentación a los lectores ya aparece la intención del autor: *La recherche des Monuments de la Monarchie Française faifoit un de mes principaux foins lorfque je travaillois fur les Rois de la premiere, de la seconde, & fur quelques, uns de la troisième race. Mas a mesure que nous approchons de ces bas tems, ces Monuments deviennent moins rares; & ils se multiplient tellement aun quinzisième (...)*<sup>1472</sup>.

En estos años se van a presentar desde los círculos intelectuales un gran número de proyectos con el fin crear un museo nacional con los bienes pertenecientes a la Corona, quedando en el dominio privado del Monarca. En 1747 la Font de Saint Yenne hace una radiografía sobre el estado en que se encontraban en este momento las pinturas del Palacio del Louvre, recomendando la construcción de una galería en una de sus habitaciones: *Un*

<sup>1469</sup> SEBATIERM Gérard *Allégories du pouvoir à la cour de Louis XIV*, Ciclo de Conferencias Arte Barroco e ideal clásico, Aspectos del arte cortesano de la segunda mitad del siglo XVII, Roma, mayo-junio, 2003, Real Academia de España en Roma, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, pp.177-178.

<sup>1470</sup> PERRAULT, C. *La peinture, poème*, Ed. Jean-Luc Gautier-Gentès, Genève, Droz, 1992, p.225.

<sup>1471</sup> DE MIGUEL SANCHES, Noelia *Las Academias y su configuracion juridica*, Cedecs Derecho Administrativo, Barcelona, 1999

<sup>1472</sup> Montfaucon, Bernard de *Les Monumens de la Monarchie Française qui compennent L'Histoire de France, ave les figures de Chaque Regne*, Tome Cinquiémé, p.3.

*moyen bien supérieur à celui dont je viens de parler, qui garantirait notre Ecole d'un penchant prochain à sa ruine, et serait digne de la grandeur et de la magnificence de notre Roi, le souverain d'une nation dont le génie est si heuereux por les Beaux-Arts, moyen dont l'exécution honorerait infiniment ceux à qui Sa Majesté daigne confier la protection qu'elle leur acorde, ce serait de faire construire une vaste galerie, ou plusieurs contigües, bien éclairées, dan le chateau du Louvre, ce palais inhabite, quoique si digne de l'habitation de nos monarques, qui fait encore l'admiration des élever aujourd'hui au milieu de sa cour un bâtiment pour un particulier, à plusieurs étages et en pierres de taille (...).* Por su parte, Buffon y Lamack convertiría el Jardín de Plantas del Rey en París una institución científica y museística. En 1765 Diderot presentaría un proyecto de museo nacional para que fuera instalado en el Louvre en el volumen noveno de la Enciclopedia, con una cierta analogía de lo que había sido el Museionn de Alejandro, por lo que el palacio no solamente albergaría las colecciones sino también las Academias, que habían sido instaladas muy defectuosamente. De esta manera en la planta baja del palacio se instalaría el museo de escultura, y las galerías de pinturas, a lo que se uniría otros organismos dispersos por París, tales como el Gabinete de Medallas, el Gabinete de Historia Natural, etc<sup>1473</sup>. En 1750 el Marqués de Marigny, director general de directeur general des Bâtiments Roi du presenta un proyecto por el que el Palacio de Luxemburgo, se convertiría en un museo abierto al público, convirtiéndose en un verdadero precedente del Museo del Louvre<sup>1474</sup>. En 1774, el primer año del reinado de Luis XVI, se encomendaría al conde D'Angiviller, Director General de Construcciones, la política de Bellas Artes de la Monarquía Ilustrada, por lo que presentaría un proyecto de apertura de las colecciones reales diseñando para ello la Gran Galería en el Louvre. El Rey aprobaría el proyecto a mediados de 1788, que no pudo terminar su encargo por la irrupción de las revolucionarias<sup>1475</sup>.

### 3.1.6. Otras disposiciones normativas de tutela pública en la Europa de la Ilustración.

Isabel de Inglaterra prohibiría en 1560 la destrucción de monumentos históricos con la promulgación del **edicto “Against breaking and defacing monuments”** de la reina Isabel I de Inglaterra de 156. En 1666 **inventario de Suecia declara propiedad de la Corona todas las antigüedades que se descubrieron en la Corona**. Varios reyes escandinavos promulgaron edictos sobre la conservación de los monumentos como Cristian IV de Dinamarca en 1622, Gustavo Adolfo de Suecia en 1630 y Carlos IX en 1666. El Edicto de María Teresa de Austria de 12 de agosto de 1749 por el que serían protegido

---

<sup>1473</sup> BAZIN, Germain El tiempo de los museos, p.153.

<sup>1474</sup> GORDON, Alden R, The House and Collections of the Marquis de Marigny, Los Angeles, Getty Press, 2003.

<sup>1475</sup> Inventing Louvre,

los Archivos, a los que se unirían una serie de decretos con el objeto de prohibir la exportación de bienes muebles de interés histórico y artístico, estableciendo incluso un derecho de adquisición preferente a favor del Estado.

### **3.2. La génesis de la tutela pública del Patrimonio Monumental a raíz de los procesos revolucionarios de la Francia Contemporánea (1789-1814).**

La Revolución Francesa ha sido considerada por toda la tradición historiográfica una ruptura radical del orden socio-económico y político-jurídico con respecto al sistema del Antiguo Régimen, realidad jurídica que no dejó de influir en la construcción jurídica del Patrimonio Histórico-Artístico en esta etapa revolucionaria. La irrupción del derecho de la propiedad privada y el desmantelamiento de la propiedad estamental no dejan de ser hitos primordiales en el nuevo escenario jurídico-político nacido del proceso revolucionario, dejando una huella considerable en el ámbito de la protección pública del Patrimonio Monumental. La Revolución Francesa abre el camino a una consideración en el camino de la concienciación patrimonial pública al gestarse una nueva concepción del patrimonio. Según Víctor J. Ventosa la concepción pública de la cultura patrimonial en Europa se pasaría de un planteamiento puramente elitista, a convertirse en una preocupación política de gran importancia para los gobiernos liberales. Poco a poco, la clase dirigente irá tomando conciencia de la necesidad de poner en marcha una amplia gama de iniciativas de difusión cultural y de compensación educativa en amplios sectores de la población, por lo que se iniciará un amplio desarrollo de la política de difusión cultural, como en ninguna etapa anterior se había dado en las sociedades occidentales anteriores<sup>1476</sup>. La instrumentalización política del Patrimonio Histórico-Artístico por parte de los poderes públicos al convertirse el Estado en un agente educador de primer orden con fines puramente ideológico en la que los bienes históricos-artísticos desempeñarán un papel primordial. En el Antiguo Régimen, el acceso de la cultura era restringido a sectores minoritarios, no siendo hasta la lustración cuando se abriría el camino hacia una apertura de la cultura en el sentido moderno, siendo el Informe sobre la Organización General de la Instrucción Pública del Marqués de Condorcet (1792), uno de los primeros alegatos conocidos a favor de la democratización de la cultura. Sería con el Estado Liberal cuando definitivamente se inserta un verdadero programa educativo de divulgación cultural con fines ideológicos. En el Título I de la Constitución de 1791 se establecía la configuración de la instrucción pública: *Será creada y organizada una instrucción pública, común a todos los ciudadanos (...)*.

<sup>1476</sup> VENTOSA, Víctor J. *Fuentes de la Animación Sociocultural en Europa*: Madrid, Popular, 1993.



Es precisamente en la confiscación de los bienes históricos-artísticos del Patrimonio Monumental Estatal y en su propio destino donde podemos situar el arranque de la consideración del bien histórico-artístico como bien de interés general. Conservación y Vandalismo serán dos actitudes que se contrapondrán durante estos momentos iniciales que se traducirán en la elaboración conceptual de un interés nacional que les de fundamento a la hora de ser protegido por el Poder Público, anticipándose a lo que posteriormente ocurrirá en un gran número de países europeos. El interés nacional al mismo tiempo justificará su conversión en bienes de dominio público, dotados jurídicamente de una nueva identidad contextual por lo que se produce un proceso de descontextualización y secularización que los separará del fin originario por los que habían sido creados, por lo que se convierten en parte de la identidad del nuevo sujeto político nacido en este momento, el pueblo y su representatividad política que es la nación, frente a las concepciones patrimonialistas de la nobleza, el clero o la propia Monarquía. De esta manera los bienes confiscados se separan de las iglesias y de los espacios monásticos para ser expuestos no ya en las galerías reales sino en los nuevos espacios públicos conocidos desde este momento como museos nacionales. La irrupción de la propiedad privada como derecho absoluto del ordenamiento jurídico proyectaría un nuevo hecho jurídico trascendental en el ámbito del Patrimonio Monumental: la judicialización de la disposición y gozo de los propietarios sobre los bienes históricos-artísticos que fueron acaparando a raíz del intenso mercado artístico en el ámbito burgués.

### **3.2.1. La transformación de la propiedad estamental monumental en bienes de dominio público en la Francia revolucionaria.**

*- Un nuevo significado del Patrimonio Monumental en las convulsiones del proceso revolucionario francés: La desvinculación estamental del Patrimonio Monumental y su transformación en Bienes de Interés Nacional.*

Sin ninguna duda el hito trascendental más importante producido en el seno del Patrimonio Monumental en la Francia Revolucionaria es la desvinculación estamental producida en un gran número de bienes históricos-artísticos que hasta este momento habían pertenecido a la Monarquía y a la Iglesia, más como propiedad de bienes materiales vinculada al estamento que una propiedad meramente privada de carácter individualista. El debate ideológico que se va a producir sobre el destino de los bienes confiscados por el gobierno revolucionario francés incita a definir al Patrimonio Monumental como un bien público, en la que el propietario del mismo será la Nación como sujeto político representativo de los ciudadanos, fundamentado en un incipiente interés nacional, verdadero precedente del interés general que va a insertarse en

el ordenamiento liberal decimonónico, dejando atrás la concepción patrimonialista del los bienes históricos-artísticos del Antiguo Régimen<sup>1477</sup>.

Las ideas innovadoras de la Revolución Francesa en 1789 y los sucesivos procesos revolucionarios abrieron definitivamente el camino a la secularización del concepto del Patrimonio Cultural. La desacralización del Bien Religioso será el punto de partida sin ninguna duda en el camino al incipiente valor cultural que en los sectores intelectuales minoritarios se estaban produciendo a principio del siglo XIX. Un ejemplo significativo de este hecho lo encontraríamos ya en el destino de un gran número de bienes religiosos que había pertenecidos a las órdenes religiosas y que serían depositados en el Convento de los Agustinos Menores bajo la supervisión de Alexandre Lenoir. Nacería la moderna concepción de la museografía contemporánea a través de las colecciones privadas procedentes de los bienes impregnados. La desamortización de los bienes muebles e inmuebles de carácter religioso se convertirá en el camino definitivo hacia su sacralización y hacia una nueva perspectiva de su valoración como digno de protección. Nuevamente podemos realzar una lectura ideológica de carácter nacionalista en la acción desacralizadora al perder su identidad religiosa para adquirir una nueva dimensión social: ser un elemento fundamental en la identidad de los Estados Nación recién constituido. Así los bienes históricos-artísticos que habían tenido en su origen una clara finalidad devocional, sustentadora del mundo espiritual de las comunidades, como fueron los conjuntos de pinturas, esculturas y demás objetos situados en los diferentes espacios conventuales se habían convertidos en partes integrantes de la cultura laica nacida del proceso revolucionario con un ingrediente ya plenamente cultural con fines claramente ideológico. No se valoraba ya un sentimiento religioso, el motivo devocional representado, sino que se realzaba una figura de la historia, un gusto estético, en definitiva la conciencia de pertenecer a una identidad nacional concreta simbolizada en estas obras. Los nuevos espacios expositivos de estos bienes irán descontextualizándose de su propio origen y serán precedidos de una nueva lectura que romperá con la concepción tradicional que hasta este momento había significado el Patrimonio.

Al igual que los bienes religiosos, el carácter solemne de majestad que envolvían los bienes del Patrimonio Real, se irán transformando en una relectura claramente de contenido ideológico. Los Bienes que habían representado la grandeza de la Institución Monárquica como poder sublime dado por Dios se convertiría en la nueva identidad nacional de los Estados Nacionales emergentes con los procesos revolucionarios. Los antiguos Palacios Reales, las antiguas colecciones reales, o se convierte en un claro referente de la potestad del nuevo Estado Liberal. En muy poco tiempo se había pasado de una función puramente sacralizada de la Monarquía a una concepción

<sup>1477</sup> HERNANDEZ, Francisca 2008, p.73.

secularizada de los bienes nacionales. La simbología como poder de la antigua Monarquía Absolutista europea se ha convertido en este proceso en la ostentación de la nueva potestad que la soberanía popular ha adquirido en los nuevos Estados Liberales. La lectura simbólica de los bienes que exaltaba los valores regios del Antiguo Régimen ha sido sustituida por la identidad de un colectivo que como pueblo soberano se verán reflejado en ellos. No cabe duda que se ha entrado en un nuevo modelo de concienciación valorativa del patrimonio, que culminará en el Estado Social y Democrático de Derechos con el concepto contemporáneo de Bien Cultural.

	Proceso de secularización de los Bienes Históricos-Artísticos.	Proceso de destemporalización de los Bienes Históricos-Artísticos.
Antiguo Régimen	Sacralización de los Bienes Históricos-Artísticos	Concepción lineal del tiempo
Ilustración	Concepto secularizador generado en las teorías de la Enciclopedia.	Concepción del tiempo como progreso
Revolución Francesa	Desacralización de los Bienes Religiosos y Políticos.	Concepción de ruptura temporal con el Antiguo Régimen.

La descontextualización y la sacralización por consiguiente, se han convertidos en los nuevos principios jurídicos que dotan de fundamento ideológico a la hora de buscar un nuevo destino a los bienes históricos-artísticos confiscados por la Nación. La exaltación de los valores nacionales sustentará la identidad del nuevo Patrimonio Histórico-Artístico que habrá que proteger y conservar. Francisca Hernández sintetiza la impronta que la Revolución Francesa va a tener en la configuración del Patrimonio Histórico-Artístico: *En consecuencia, la Revolución Francesa supone un aldabonazo en la conciencia de los ciudadanos, que experimentan una cierta ambigüedad en su actitud frente al patrimonio. De hecho, por una parte, desean acabar con el Antiguo Régimen y sus símbolos y, por otra, pretenden asumir y conservar su propio pasado. De esta toma de conciencia surge el nuevo concepto de nacionalización de los bienes culturales, que pasarán a convertirse en bienes de interés público, cuyo conocimiento y disfrute ha de estar abierto a todos los ciudadanos.* Choay señala el año 1789 como el punto de partida de la configuración de un verdadero Patrimonio Nacional tanto desde el ámbito de la construcción de la figura jurídica como desde la propia institucionalización administrativa.

La primacía de la actitud conservadora sobre la vandálica en el seno del proceso revolucionario no va a dejar inderme a la propia concepción del Patrimonio Monumental, cuya relectura sociocultural va a proyectarse en su

propia identidad jurídica. En este sentido se va a ir delimitando un nuevo bien jurídico que hay que proteger como fundamento ideológico de la nueva realidad política-jurídica: la nación que ha sustituido a la Monarquía Absolutista, por lo que en principio los valores patrimoniales que hasta este momento encerraban estos bienes en el momento de su elaboración se truncan en un nuevo discurso axiológico. El Estado Revolucionario, como antes hizo la Monarquía Revolucionaria, se apodera de estos bienes históricos-artísticos, buscando en ellos las raíces históricas que sostienen el nuevo aparato político-administrativo, por lo que el Patrimonio Monumental ha pasado de ser unos bienes que habían exteriorizado la identidad de un linaje o institución religiosa para convertirse en instrumentos propagandístico de un ente abstracto como es la Nación, que ha de dotarle política y socialmente. De esta manera, los palacios reales, los conventos suprimidos, las iglesias nacionalizadas, los palacios nobiliarios adquiridos, no se observan ya como referencias ideológicas que para ello en su origen se habían realizados, sino que por el contrario se aprecian por su valía artística e histórica, y más aún por convertirlas en elementos primordiales de la nueva identidad que se le está dotando al nuevo Estado nacido de la revolución. Se está produciendo lo que vamos a definir una **descontextualización** del Patrimonio, ya que obras realizadas para un fin primordial van a ser desvinculadas de su identidad, para insertarlas en un nuevo contexto social y político distinto. La Revolución Francesa rompe con la dinámica temporal de carácter lineal propia del Antiguo Régimen. Se busca ante todo una ruptura no solamente ante el hecho de un orden político y social determinado, sino incluso ante la delimitación de una nueva concepción temporal, ajena al ciclo histórico anterior. Se percibe la idea de que se estaba produciendo una nueva etapa que marcará la evolución del género humano, un antes y un después, por lo que incluso se delimitará nuevas medidas del tiempo, la invención de un calendario revolucionario, que sustituya al tradicional judeo-cristiano. Así el Patrimonio a conservar aunque pertenecen a una dimensión espacio-temporal distinta, rompen con su origen, se insertan en el nuevo mundo nacido en el proceso revolucionario, por lo que el Louvre o las Tullerías, a pesar de ser concebido en un pasado histórico anterior, se insertan en el nuevo orden, sin necesidad de haber sido construido contemporáneamente, son bienes ajenos a su temporalidad original, y al contexto en que nacieron.

A la descontextualización se le va a unir un proceso de **secularización** de los bienes históricos-artísticos, especialmente en el caso de los bienes eclesiásticos, al dotarlos de un nuevo contenido ajeno al propiamente religioso de su origen. De esta manera los ciclos pictóricos creados en honor de los santos fundadores o de exaltación mariana por parte de las congregaciones religiosas durante los siglos XVII y XVIII, perderán su identidad iconológica, para convertirse en bienes dotados de valores históricos y artísticos, reflejos de la creatividad nacional. Los valores religiosos que impregnaban estos

inmuebles han sido sustituidos por otros valores laicos que delimitan su protección<sup>1478</sup>. Sin ninguna duda el Valor Religioso se había definido como el fundamento ideológico primordial en la creatividad humana hasta la etapa liberal, no solamente en la cultura cristiana sino en el propio Paganismo de la Antigüedad Clásica. Los comportamientos sociales del fenómeno religioso dictados por el Concilio de Trento e impulsadas desde el poder político durante todo el Antiguo Régimen entrarían en una profunda crisis en el pensamiento racionalista de la Ilustración y posteriormente con la Revolución Francesa. No cabe duda como apunta Thomas Munck que el fenómeno religioso va a seguir siendo un factor determinante en la identidad cultural de la etapa de la Ilustración, pero no por ello podemos dejar de apreciar nuevas sensibilidades que rompían con la unicidad de la época del Barroco. Desde la Ilustración asistimos a la configuración de una religión natural alternativa a la oficialista católica o a la propia luterana-calvinista, el deísmo, que rechazaba toda revelación divina, desmitificando el contenido religioso, como fue el caso de Hume en su célebre obra *Historia natural de la religión* (1757), o el propio Voltaire que arremataría contra el fanatismo religioso de las instituciones en su *Tratado sobre la tolerancia* (1763). Unos años antes, en 1751, saldría publicado la *Encyclopédie* que sería dirigida por Diderot y d'Alembert que abriría el camino claramente hacia la secularización de la cultura europea<sup>1479</sup>.

**- Conservación y vandalismo como debate generador de la conciencia pública del Patrimonio Monumental desde la convocatoria de los Estados Generales a la caída de la Monarquía (10 de agosto de 1792).**

La confiscación de los bienes del clero el 2 de noviembre de 1789 y los bienes de los emigrantes (8 de agosto de 1792). En el artículo primero se establecería que los bienes del clero quedaban a disposición de la Nación, por lo que en el caso de las obras de arte que habían pertenecido a las órdenes religiosas perdían su original identidad, como puntualiza *immenses richesses de l'Église en collections artistiques, qui, en changeant brutalement de destination et en perdant leur caractère sacré et leur fonction symbolique, risquaient de tomber au rang d'objets ou de marchandises, soumis aux aléas des démembrements, des dispersion et des ventes*. La destrucción de los símbolos feudales va a superponerse a toda idea de conservación de un legado patrimonial en una primera fase, como se refleja en

---

<sup>1478</sup> Muy claras son en este sentido las referencias del abad George en su alegato a la conservación de algunos inmuebles religiosos: *La Catedral de Estrasburgo, cuya torre es la pirámide más alta de Europa y no mucho menor que la pirámide de Egipto; siendo, además, superior a esta última como edificación, ya que el triángulo que dibuja la sección tiene una base mayor que la altura. Cuando el experto contempla estas basílicas, suspendidas sus facultades por la admiración que le sobrecoge, apenas le es posible respirar: se enorgullece de ser hombre al pensar que sus semejantes pudieron ejecutar tales obras, y la satisfacción que experimenta viéndolas en la patria de la libertad se agrega a su felicidad de ser francés*. GRÉGOIRE, Abad, Deuxieme rapport, La cita está tomada de CHOAY, François, p.110.

<sup>1479</sup> MUNCK, Thomas *Historia social de la Ilustración*, Crítica, Barcelona, 2001, pp.55-56.

la actuación de la propia Convención cuando el 28 de junio de 1790 un grupo de artistas propone un modo de conservar las cuatro estatuas de Luis XIV que estaban situadas en la plaza de la Victoria de París, respondiendo el presidente Le Peletier de Saint-Fargeau: *La liberté prête aux Beaux-Arts une nouvelle flamme: mais ceux-ci réchauffent aussi le génie de la liberté. C'est à des sujets Nationaux que vous consacrerez vos talents; par-là vous saurez expier les antiques erreurs de la flatterie. Messieurs, les Monuments de Louis XIV offrent genre de parfaits modèles, mais vous les égalerez; &, dans l'histoire des beaux-arts, le siècle d'une grande nation ne le cèdera pas à un siècle d'un grand Roi.*

Sin embargo, el hecho de concenciar la pérdida que supondría para el legado patrimonial de la Nación haría que se fundara en París un comité d'administration des biens nationaux, que sería constituido por los arrêtés de 19 al 23 de julio de 1790, encargando al pintor Gabriel François Doyen (1726-1806) un primer proyecto de museo donde instalar las obras monacales que considerara dignas de conservarse, por lo que se dispone que tous les tableaux dont il serait convenable de retarder la vente, pour la faire plus avantageusement, seraient placés dans l'église des Petits-Augustins<sup>1480</sup>. El 6 de octubre, la Academia de Pintura y de Escultura enviaría una nota mostrando que la venta indiscriminada de bienes nacionales *peut exposer la nation à perdre un grand nombre de chefs d'oeuvre de peinture et de sculpture, par lo que demandaría en consecuencia en nombrar unos commissaires paermi ses peintres et sculptures*. Y por fin Tayllerand pronuncia un discurso institucional en la Asamblea Legislativa que constituirá el verdadero cambio en la concepción de las obras que debían ser salvadas al subrayar que las obras de artes sirven como instrumento vital de la instrucción pública por lo que el Estado debe de salvaguardarlas: *Enfin votre comité doit mettre sous vos yeux une sorte de délit qui intéresse le département de l'instruction publique: il lui est revenu de plusieurs endroit que des monuments précieux avaient été pillés ou indignement dégradés. Les chefs-d'ouvre des arts sont de grands moyens d'instruction, dont le talent enrichit sans cesse les generation suivantes. C'est la liberté qui les fait éclore, c'est donc sous son règne qu'ils doivent être religieusement conservés, et l'Assemblée nationale ne saurait tyop se hater de fixer sur cet objet la surveillance active des different corps administratifs du royaume*. El discurso de Teyllerand va a suponer la base doctrinal de la promulgación del decreto de 13 de octubre, por el que dispondría que *les directoires des départements de faire dresser l'état et de veiller, par tous les moyens qui seront en leur pouvoir, à la conservation des monuments, des églises et maisons devenues domaines nationaux, qui se trouvent dans l'étendue de leur soumission; et lesdits états seront remis au comité d'alineation (3º)* y *Elle commet au même soin, pour les nombreux monuments du meme genre qui existent à París, pour tous les dépôts de chartres, titres,*

<sup>1480</sup> POMMIER, Edouard, p.43.



*papiers et bibliothèques, la municipalité de cette ville qui s'associera, pour éclairer sa surveillance, des membres choisis des différentes académies (4º).*

Como consecuencia del decreto, el comité de alineación de bienes nacionales nombra una comisión de savant, a raíz del decreto de 6 de diciembre de 1790, que tuvo su primer seance el 8 de noviembre, que tan solo duraría tres años y que sería sustituido por la Commission Temporaire des Arts que sería creada por la Convención el 18 de diciembre de 1793. Pommer subraya como se abre un verdadero precedente en la historia de la protección, al resultar *un comité de spécialistes était officiellement chargé par le pouvoir politique d'établir ou, du moins, de préparer l'inventaire des richesses artistiques de la France et de réfléchir à leur destination*. Esta primera Comisión elaborará un primer documento, *L'Instruction concernant la conservation des manuscrits, chartes, sceaux, livres, imprimés, monuments de l'Antiquité et du Moyen Age, statues, tableaux, dessins, et autres objets relatifs aux beaux-arts, aux arts mécaniques, à la historia naturelle, aux mœurs et usages de différents peuples, tant anciens que modernes, provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques et faisant partie des biens nationaux*, todo un precedente en el ámbito de la protección monumental de los bienes confiscados, a la que se une una *Instrucción concernant les châsses, reliquaires et autres pièces d'orfèvrerie, provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques et destinés à la fonte* (1791). El 9 de diciembre de 1790, el anticuario francés **Aubin Louis Millin (1759-1818)** acude a la Asamblea Constituyente con el objeto de reclamar a los diputados una mayor atención a los que ya calificaría como Monumentos Históricos de la nación. **en su obra Antiquités nationales.**

La salvación de las obras pertenecientes a las colecciones reales se va a convertir en otro de los puntos clave de la política del patrimonio cultural. La proposición del diputado Bertrand Barère de Vieuzac dará lugar a la promulgación del decreto de **26 de mayo de 1791**, que creaba la lista civil del rey, en su artículo primero establecería que *Le Louvre y les Tuileries réunis seront destinés à l'habitation du roi, à la réunion de tous les monuments, de sciences et de arts, et aux principaux établissements de l'instruction publique; se réservant l'assemblée nationale de pourvoir aux moyens de rendre cet établissement digne de sa destination, et de se concerter avec le roi sur cet objet*. En el artículo 2º se especificaría que *Les bâtiments dépendant du domaine national, renfermés dans l'enceinte projetée du Louvre et des Tuileries, seront conservés et loués au profit du trésor public (...)*. El Museo sería creado en la línea que había propuesto dos años antes D'Angivillers y Quincy. De esta manera y para salvar las colecciones reales el ministro del interior del gobierno provisional, J.M. Rolland, va a promulgar el decreto 19 de septiembre de 1791, disponiendo que se reuniesen en el museo del Louvre las tablas procedentes de maisons ci-devant royales et autres édifices nationaux. y el 1º de octubre el propio Roland crea una Commission de Museum, presidido por el propio Roland, e integrado por seis personas

Poulot consideraría que el Discurso sobre los monumentos públicos, pronunciado el 15 de diciembre de 1791 por Armand-Guy Kersaint dirigido al Consejo de Departamento de París: *Les monuments sont les témoins irréprochables de l'histoire (...) Que les Français songent à la postérité. Une nation libre qui chérit la gloire voudra vivre dans l'avenir et consacrer la plus glorieuse époque des annales de l'esprit humain par un édifice digne de la sublimité (...) Considerant ensuite les monuments sous leurs rapports d'intérêt public, nous avons cru que votre position centrale, disons plus nationale, vous rendoit en quelque sorte responsables envers la nation de la conservation des édifices dont la réputation et la beauté sont une partie de la gloire, et qu'elle pouvoit.* En la historiografía francesa se ha sugerido tradicionalmente, siguiendo la tesis de Babelón y Chaste, que las demoliciones ocurridas en el París revolucionario fue el factor determinante de la génesis de una verdadera concienciación pública del Patrimonio Histórico-Artístico en el sentido contemporáneo del término<sup>1481</sup>. La destrucción de monumentos, los que los críticos franceses denominarían con el término Vandalismo va a ser una causa determinante a la hora de despertar una verdadera conciencia pública del Patrimonio Histórico. En palabras del sociólogo del arte Vicenç Furio *La destrucción de obras de arte presenta unas claras causas sociológicas: Las guerras siempre conllevan destrucción, al igual que las revoluciones violentas. A veces, la necesidad de reafirmación del poder religioso o político también han dejado un rastro de cenizas y de extrañas transformaciones (...) La destrucción o mutilación, por razones de decencia y de moral, ha afectado a miles de obras en la historia del arte (...), motivos religiosos (...) por motivos estéticos también se han destruido obras de artes. Los nuevos estilos artísticos a menudo se han impuesto menospreciando o condenando al ostracismo y a la ruina las obras de estilos anteriores (...)*<sup>1482</sup>. Es en la Francia revolucionaria donde se pone en entredicho la rapiña desmedida que había provocado las olas incontroladas contra los símbolos del Antiguo Régimen, despertando un sentimiento de pérdida material de bienes que habían pertenecido al pasado y podían ser incorporados a la nueva etapa histórica que se estaba construyendo en el proceso revolucionario.

**- De la iconoclasia revolucionaria a la tutela pública del Patrimonio Monumental Estatal: La génesis institucional del museo público en la Francia Revolucionaria.**

En la etapa de se desarrolla más ampliamente el debate entre la iconoclastia revolucionaria y la protección de los bienes artísticos. El 10 de agosto el Palacio de las Tullerías fue overrum y el rey Luis XVI fue hecho prisionero, por lo que las colecciones reales fueron declarados propiedad nacional<sup>1483</sup> y la ley **de 18 de agosto de 1792** relativa a la supresión de las órdenes seculares y la confiscación de sus bienes. La destrucción patrimonial

<sup>1481</sup> En este sentido Paul León puntualiza como La revolution, qui a été pour les monuments une époque de destruction aveugle, est aussi le premier régime qui ait tenté d'organiser leur conservation.

<sup>1482</sup> FURIO, Vicenç. Sociología del arte, pp.372-373.

<sup>1483</sup> MCCLELLAN, Andrew, 1994, p.91.

se haría seleccionadamente con un claro matiz político, por lo que aquellos bienes históricos y artísticos que se habían identificados con el poder político depuesto por el nuevo Estado Revolucionario había que ser eliminado. Anthony Vidler ya apunta como *Al menos en los tres primeros años de la Revolución, la naturaleza patriótica de los monumentos históricos no era de ningún modo universalmente aceptada (...). La destrucción de monumentos concretos se convirtió incluso en una política pública (...). Desde 1790, las pertenencias de las iglesias y monasterios despojados de sus privilegios y de los chateaux saqueados se consideraban un legítimo botín en lugar de verse como recuerdos históricos. De hecho, su propia historia lo hacía culpables*<sup>1484</sup>. De este manera entre 1790 y 1794, un gran número de iglesias, conventos e incluso edificios civiles fueron perdidos irremediablemente. Las obras de arte que fueron confiscadas en toda Francia se reunirían en depósitos, especialmente en los conventos que habían sido evacuados, por lo que concretamente en París se instalarían en la de los Pequeños Agustinos, los Capuchinos, los Grandes Jesuitas, los franciscanos y en el hotel de Nesles, siendo seleccionados por unos comisarios que se movían más por intereses ideológicos de reigambre antifeudal que por un interés histórico y artístico, por lo que muchas obras serían destruidas.

Henri Rebour defendió en la Asamblea el **24 de julio de 1792** para evitar que las estatuas reales fueran destinadas a fundirse en piezas de artillerías en los siguientes términos: *Détruire les statues, ce n'est pas, comme on vous l'a dit, détruire le despotisme; c'est détruire des monuments élevés par les arts, et qui font honneur aux arts. Je vous rappellerai que les artistes de toutes les nations vont étudier leur art devant les statues de Néron et de Caligula, qui ont été arrachées aux mains des Goths et des Vandales. Je vous demande si un peuple, qui a l'amour de la liberté, peut vouloir imiter la conduite des Goths et des Vandales et renverser les monuments les monuments que les beaux-arts ont élevés, depuis trois siècles*. El **14 de agosto de 1792** la Convención vota un decreto autorizando la destrucción de los símbolos del Antiguo Régimen, que como refleja su Exposición de Motivos estaría fundamentada en la idea de los *príncipes sacrés de la liberté et de l'égalité ne permettent point de laisser plus longtemps, sous les yeux du peuple français, les monuments élevés à l'orgueil, au préjugé et à la tyrannie*. El artículo 4 por su parte decretaría que la *Commission des monuments est chargée expressément de veiller à la conservation des objets qui peuvent intéresser essentiellement les arts*. De esta manera la disposición del 14 de agosto de 1792 pasaría a convertirse en el ejemplo paradigmático de la acción demoledora del propio Estado, al proclamar la destrucción de todos los monumentos de ascendencia feudal, aunque se estipulaba que había que respetar aquellos objetos que por su interés a las artes o a las ciencias se debían conservar<sup>1485</sup>. El historiador Despois en 1868 recogería en su obra *Vandalisme*

---

<sup>1484</sup> VIDLER, Anthony *El espacio de la Ilustración*

<sup>1485</sup> RÉAU, L. *Historire du vandalisme. Les monuments détruits de l'art français*, 2 vols., Hachette. París, 1959. Curiosamente en 1793 el Municipio de París votará la demolición de la escultura del Rey de la fachada de Notre Dame, ejecutándose poco tiempo después.

Revolucionaire la amplia nómina de obras religiosas que se fueron destruyendo durante este momento<sup>1486</sup>.

**El 22 de agosto de 1792** se abre en la Asamblea Legislativa un debate capital que contiene en germen toda la política patrimonial de la Revolución y se pondrá el fundamento de una concepción cultural del heritage de l'Ancien Régimen. Uno de los diputados, Dusaulx llegaría a afirmar: *Les monuments du despotisme tombent dans tout le royaume; mais il faut épargner, conserver les monuments précieux pour les arts. Je suis instruit par des artistes célèbres que la porte Saint-Denis es menacée. Sans doute, consacrée a Louis XIV, au plus fier des despotes, elle mérite toute la haine des hommes libres. Mais cette porte est un chef-d oeuvre*<sup>1487</sup>. Por fin, el **16 de septiembre de 1792**, se promulga el Decreto de la Asamblea Nacional para que no fueran destruidos los monumentos. En la exposición de Motivos ya anunciaba la nueva concepción dado al Monumento: *L'Assemblée nationale, considérant qu'en livrant á la destruction les monuments propres á rappeler les souvenirs du despotisme, il importe de préserver les chefs-d oeuvre des arts, si dignes d'occuper les loisirs et d'embellir le territoire d'un peuple libre*, por lo que se decretaba en el artículo primero que se procedería *sans délai, par la Commission des monuments, au triage des statues, vases et autres monuments placés dans les maisons ci-devant royales, qui meritent d'être conserves pour l'instruction et pour la gloire des arts*. Art.2. Du moment que le triage aura été fait, les administrateurs feront enlever les plombs, ciuvres et bronzes jugés inutiles et les feront transporter dans les ateliers nationaux<sup>1488</sup>. Frédéric Rücker en 1913 publicó un análisis detallado sobre las distintas comisiones que nacieron en el seno de la Asamblea Revolucionaria con el objetivo de conservar y proteger los bienes desamortizados, siendo ubicado en un principio en un ex convento parisino, Les petits Augustins<sup>1489</sup>.

Al mismo tiempo nacería la idea de crear un Museo Nacional donde recogiese ya todos los bienes que habían sido adquiridos por el Estado después del proceso revolucionario y podido salvar de las turbas revolucionarias. La idea empieza a cuajarse a raíz del envío de una carta fechada el 17 de octubre de 1792 por el Ministro Roland a David en la que se planteaba ya la necesidad de fundar esta institución. La historia del Museo del Louvre será sin duda alguna el paradigma de transformación que el coleccionismo regio para sufrir a raíz de los procesos revolucionarios que van a originarse en Francia en 1789 y que posteriormente se irán extendiendo por toda Europa<sup>1490</sup>. El 11 de agosto de

<sup>1486</sup> DESPOIS, E. *Vandalisme révolutionnaire. Fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la Convention*. París, 1868.

<sup>1487</sup> POMMIER, E., p.103.

<sup>1488</sup> Reau, 1994, pp.498 y ss.

<sup>1489</sup> RUCKER, F. *Les Origines de la conservation des monuments historiques en France (1790-1830)*, París, 1913.

<sup>1490</sup> Existe una amplia bibliografía sobre la historia del Museo del Louvre entre los que cabe destacar BLUM, André, *Le Louvre: Du Palais au Musée*, Ginebra, París y Londres,

1792 sería instituido una comisión encargada de organizar el Museo, y el 19 de septiembre de 1792 sería promulgado el Decreto ordenando el transporte dans le Dépôt du Louvre des tableaux et autres monuments relatifs aux Beaux-Arts se trouvant dans les maisons royales (artículo primero), Art.2. Quant aux statues placées dans les jardins de Versailles, elles resteront en place jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Art.3. Les corps administratifs et municipaux prêteront assistance à la Commission des monuments pour l'exécution du present et veilleront spécialement à ce qu'il ne soit apporté aucun dommage aux monuments qui seront laissés sous leur surveillance. Con el Decreto de 27 juillet de 1793 se dispondría la apertura del Museo de la República, que debería de ser el 10 de agosto de 1793, con la idea de celebrar el primer aniversario de la caída de la Monarquía, que aunque realmente se abriría al público, se tuvo que cerrar a finales de septiembre al tener que hacerse reparaciones urgentes, volviéndose a reinagurar el 18 de noviembre de 1793. Unos meses después, el pintor David va a criticar enérgicamente las que había realizado la Comisión del Museo, en una y en un segundo Rapport Por lo que el 27 nivose an II (16 janvier 1794) sería suprimida la anterior Commission du Muséum, incluyéndose en la nueva artistas de la talla de Fragonard, Bonvoisin, Wicar, Dupasquier, Lannoy, Picault, varon y Lesuer, añadiéndose el cargo de Conservatoire du Muséum<sup>1491</sup>

El balance de la configuración del Museo Louvre como colección pública, en la que la Nación como símbolo de la reunión de los ciudadanos, se convertiría en su verdadero propietario, está perfectamente sintetizado por Carlos Duncan en los siguientes términos: *El Louvre no fue la primera colección real que se puso a disposición del público en un museo, pero su transformación fue la más significativa políticamente y la más influyente. En 1793, el gobierno revolucionario de Francia, aprovechando la oportunidad de dramatizar la creación del estado republicano, nacionalizó la colección de obras de arte del rey y declaró al Louvre institución pública. El Louvre, que una vez fue palacio de reyes, se reorganizó como museo para el pueblo con fin de que estuviera al alcance de todos, gratuitamente. Se convirtió en un lúcido símbolo de la caída del antiguo régimen y del nacimiento de un orden nuevo (...) El nuevo museo resulto ser fuente de potentes simbólicos. La transformación del palacio en espacio público accesible a todo el mundo hizo del museo una demostración palpable del compromiso del estado con el principio de igualdad (...) Como flamante espacio público y ceremonial, el Louvre (...) asignaba nuevo significado a los objetos exhibidos (...)*

---

1946;GOULD, Cecil, *Trophy of Conquest: The Musée Napoleon and the creation of the Louvre*, Londres, Faber&Faber, 1965;McCLELLAN, Andrew, *Inventing The Louvre: Art, Politics and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

<sup>1491</sup>TUETÉY, Alexandre, *La Commission du Muséum et la creation du Musée du Louvre (1792-1793)*, París, 1904, p.



*Presentado como propiedad del pueblo, se transformó en herramienta a través de la cual se establecía simbólicamente una nueva relación entre el individuo como ciudadano y el estado como benefactor*<sup>1492</sup>. La génesis del museo público en el ámbito del proceso revolucionario francés simboliza el nuevo cariz que van adaptar los bienes históricos-artísticos que habían sido adquiridos por el nuevo Estado a raíz de las medidas revolucionarias de confiscación de su antiguos propietarios, y al mismo tiempo el ansia de protegerlos y conservarlos al ser considerados como bienes nacionales. De esta manera Germain Bazin sintetiza la impronta que va a tener la Revolución Francesa en el destino de los bienes incautados a los poderes del Antiguo Régimen: *Se ha podido decir que la Revolución no hizo otra cosa que realizar los proyectos museológicos del Antiguo Régimen, pero lo cierto es que lo llevó a cabo con mayor amplitud (...). La Revolución Francesa hizo un enorme consumo de obras de arte; hasta este momento, los movimientos que afectaban a estos preciosos objetos sólo tenían naturaleza comercial; muchas obras permanecían en su lugar de origen desde su creación; únicamente la evolución del gusto amenazaba su destino. En el momento de la Revolución, las obras de arte van a encontrarse disponibles por millares. Como pertenecían a personas físicas o morales que habían perdido su existencia legal, como el rey, la Iglesia y los nobles emigrados, dichas obras se nacionalizaban. Era preciso darles un nuevo destino. No todas se conservaron para uso del público; muchas fueron puestas en ventas (...)*<sup>1493</sup>.

El Salón de 1793 organizado por la Commune générale des arts, se discute ya los principios estéticos de la Revolución, entre los que se resaltarían que 1º) Que les arts sont une des branches essentielles de l’instruction publique; 4º) Que la peinture, la sculpture et la gravûre peuvent rendre toutes les nuances des passions qui agitent l’homme; 5º) Que l’architecture doit donner à chaque monument un caractère tel qu’à son aspect on reconnoisse l’objet pour lequel il est édifié y 6º) Que les monuments des arts soient les términos irrefragables de l’histoire. El 18 de diciembre de 1793 (28 Frimaire an II), sería creada por la Convención, la Commision Temporaire des Arts, que sustituiría a la Commision des Savants o Commission des Monuments, aunque solo se mantuvo hasta 1795<sup>1494</sup>, teniendo como misión primordial el inventario de los objetos de arte y de ciencias, como aparece precisado en el artículo 2 *les citoyens chargés de ces divers inventaires seront tenus de se munir de certificats de civisme*<sup>1495</sup>. La primera medida que adoptaría el nuevo órgano administrativo sería la elaboración de una instrucción de cómo hacer un inventario de aquellos objetos que debían de ser conservados, siendo designado para su elaboración el anatomista Félix Vicq-d’Azyr (1748-1795). En su preámbulo ya se mencionaría el nombramiento de la Comisión por el decreto

<sup>1492</sup> DUNCAN, Carlos, 2007, pp.46-49.

<sup>1493</sup> BAZIN, G. *El tiempo de los museos*, Ed. Daimón, Barcelona, 1969, pp.170-171.

<sup>1494</sup> Procès-verbaux de la Commision temporaire des arts

<sup>1495</sup> HOULD, Claudette Les beaux-arts en revolution: au bruit des armes les arts se taisent!, Études françaises, n° 2-3, 1989,



de 28 frimaire con el nombre de Commission temporaire des arts, y en el mismo decreto se pondrían las bases de la conciencia patrimonial del nuevo Estado: *Les objets qui doivent servir à l'instruction, et dont un grand nombre appartenoit aux etablissemens supprimés, méritent toute l'attention des vrais amis de la patrie: on les trouvera dans les bibliothèques, dans les musées, dans les cabinets (...) dans les palais et dans les temples que décorent les chefs-d'œuvres des arts, dans tous les lieux où des monuments retracent ce que furent les hommes et les peuples; par-tout, enfin, où les leçons du passé, fortement empreintes, peuvent être recueillies par notre siècle, qui saura les transmettre, avec des pages nouvelles, au souvenir de la postérité. Jamais un plus grand spectacle ne s'offrit à la nation. Tous ces objets précieux qu'on tenoit loin du peuple, l'indifférence ici seroit un crime, parce que vous n'êtes que les depositaires d'un bien dont la grande famille a droit de vous demander compte (...).* Sería delimitado conceptualmente la clasificación: *est une opération secondaire, par laquelle, en donnant aux objets inventoriés un ordre méthodique, on montre l'usage qu'on en peut faire, et le rang qui leur convient. (...)*, así como el inventario, *sont eux-mêmes divisés en plusieurs colonnes qui indiquent les places particulières où sont déposés les objets, telles que les armoires, les tiroirs, les cages, les tables ou les caisses; le numéro qui est propre à chaque objet.* El proceso del inventario se realizaría siguiendo unas pautas establecidas: *1º Il sera dressé un état exact des diverses collections et dépôts qui intéressent l'instruction dans l'étendue de chaque districts et sous lesquels la République a des droits, et chacun de ces dépôts sera désigné par une lettre, comme on a fait pour les collections du même genre qui sont à Paris; 2º La distribution des travaux confiés aux commissaires des districts se fera dans l'ordre des grands articles ou sections adoptés par la commission des arts, dont chacun sera exprimé par une lettre particulière, ainsi qu'il a été exposé au commencement de cette instruction, et la rédaction des inventaires à dresser pour chacun de ces articles ou sections sera répartie entre les commissaires, à raison de leur capacité et de leurs connaissances diverses; 6º Les commissaires prépareront deux exemplaires des inventaires faits sur place. L'un de ces inventaires sera conservé dans les archives du district sur le territoire duquel il aura été dressé; l'autre sera remis au comité d'instruction, duquel chaque district recevra la portion du catalogue raisonné qui comprendra les objets inventoriés et déposés dans son sein y 8º. Les commissaires des districts correspondront avec le comité d'instruction publique, aunque il sera rendu compte des doutes à lever, des difficultés à résoudre et des obstacles qui pourroient retarder l'exécution de la loi.*

La destrucción patrimonial continúa durante el año 1793, como lo prueba la promulgación de los decretos de 4 de julio y 14 de septiembre, prescribiendo la supresión de cualquier escultura o pintura de los monumentos públicos de París que hicieran referencia a la realeza y sus atributos, lo que provocaría la alarma de los miembros del Comité de Instrucción Pública, por lo que fueron promulgadas algunas disposiciones de carácter penal como fueron el Decreto del 10 de abril de 1793, que en su artículo 5 dispondría que *Tout individu qui a en possession des manuscrits, titres, chartes, médailles, antiquités provenant des maisons ei-devant nationales, sera tenu de les remettre dans le mois au directoire de district de son domicile, sous peine d'être traité et puni comme suspect,* el **Decreto de 13 de abril de 1793** de la Convención Nacional protegiendo las

obras escultóricas del jardín de las Tullerías que dispondría que *la Convention Nationale, sur la proposition d'un membre, inspecteur de la salle, qui annonce que des malveillants ont mutilé quelques statues aux Tulleries, décrète que ceux qui seront convaincus d'avoir mutilé ou cassé les chefs-d'oeuvre de sculpture dans le jardin des Tulleries, et autres lieux public appartenant à la République, seront punis de deux ans de détention*, y el **Decreto de 6 de junio de 1793**, que establecería *la peine de deux ans de fers contre quiconque dégradera les monuments de arts dépendants des propriétés nationales*.

Sería el abate Grégoire y su defensa incondicional ante la Conversión la que abriría definitivamente el camino para una verdadera concienciación pública del patrimonio en el ámbito contemporáneo, adoptándose el término vandalismo como un acto de repulsión sobre el Patrimonio Monumental; así en un informe presentado a la Convención el 14 de fructidor del año III (31 de agosto de 1794) por el Abad Gregorio en 1794, en relación a la protección de las inscripciones romanas de la Galia: *No se puede dar ánimos a los ciudadanos por este vandalismo que no conoce más que la destrucción*<sup>1496</sup>. Como apunta Vidler el abate Grégoire, *en una serie de informes a la Convención enumeraba las siguientes razones para conservar los recuerdos y los monumentos del pasado: el nacionalismo, que reconocía el gótico francés como una de las concepciones más audaces del espíritu humano; el didactismo, que veía los objetos del pasado en los campos de los oficios y el perfeccionamiento moral, que se derivaría de la naturaleza ejemplar de las obras históricas*. En su obra publicada en París en 1794, *Rapport sur les destructions operees per le vandalisme et sur les moyens de le réprimer*, pondría de manifiesto cuales eran las obras de artes cuya destrucción se consideraba un acto de vandalismo. Al mismo tiempo el abate Gregorie defendería una nueva concepción en la valoración de los monumentos que pronto se proyectaría en el ordenamiento jurídico: *El respeto público ha de rodear de una manera especial a los objetos nacionales, los cuales no perteneciendo a nadie, son propiedad de todos*. De ahí que los monumentos encierran en sí mismo una riqueza colectiva a favor del interés general, al sustentar la memoria colectiva y la identidad nacional, por lo que toda destrucción de los mismos llevaría al pueblo hacia la ignorancia y la opresión.

La idea del interes público como fundamento jurídico de la conservacion de los Monumentos Históricos-Artísticos se generaría definitivamente en el año 1794, II de la I República Francesa, cuando la Convención Nacional emitió un Decreto dirigido a las administraciones

<sup>1496</sup> Sobre la destrucción patrimonial en el proceso revolucionario francés existe una amplia bibliografía de la que destaco REAU, L. *Historia del Vandalismo* en HERNANDEZ MARTINEZ, A. Documentos para la historia de la Restauración, Universidad de Zaragoza, 1999; Histoire du vandalisme. Les monuments détruits de l'art français. París, Éditions Robert Laffont, 1994 (1858); BERNARD-GRIFFITHS, Simone *Révolution française et "vandalism révolutionnaire"*. Actes du colloque international de Clermont-Ferrand (15-17 diciembre de 1988).

departamentales, constituyendo la primera carta oficial por la que una administración moderna institucionaliza el interés público y el deber de la salvaguarda del patrimonio monumental colectivo: *Vosotros nos sois más que los depositarios de un bien del cual la gran familia tiene derecho a pedir os cuenta. Los bárbaros y los esclavos detestan las ciencias y destruyen los monumentos de arte, los hombres libres los aman y los conservan*<sup>1497</sup>. M<sup>o</sup> José Martínez Justicia cuestiona el hecho de concebir este decreto como *la primera carta oficial de un estado moderno en la que se admite la necesidad de intervención del estado para su salvaguardia*, por lo que hay que entenderlo como *la respuesta a la necesidad de frenar los numerosos daños producidos al patrimonio francés –especialmente aquel que representaba al antiguo régimen– por la Revolución y no el resultado lógico y natural que pone de manifiesto una conciencia cívica que ha madurado en su consideración del arte en general (...)*<sup>1498</sup>. Sin embargo, ya se puede vislumbrar algunos aspectos que en el ámbito jurídico se irá recogiendo posteriormente en el ordenamiento como fue el hecho de considerar a los administradores de los departamentos como *depositarios de un bien común*, en este caso el Patrimonio Monumental, responsables de su conservación, delimitando así una publicación de estos bienes.

Boissy d'Anglas *Quelques idées sur les arts*, 13 febrero 1794 (25 pluviôse an II), *Il faut se presumer, au nom de l'histoire, contre ce sentiment destructeur qui ose conspirer encore au milieu de nous contre la conservation des arts, de leurs chefs-d'oeuvre et de leurs préceptes, qui veut en arrêter les progrès et qui semble ne s'attacher qu'à replonger la terre et surtout la France dans les ténèbres de cette ignorance barbare dont la succession lente, mais sûre, des méditations de l'esprit a su l'arracher par notre bonheur*. Como apunta el texto de Boissy d'Anglas constituye una de las primeras tentativas de reflexión de la Revolución sobre ella-misma (...) *il tente de concilier deux réalités: celle de la fracture, qui a permis le surgissement de la liberté, et celle de l'histoire, identifiée à une culture qui fait le grandeur de la France et qui, loin d'être souillée par le despotisme, a toujours été une force de libération*. Un mes después de la publicación (10 de marzo de 1794, 20 ventôse an II), la comisión temporal de artes recibió un informe sobre la degradación de *tableaux et autres monuments des arts qui ont eu lieu dans le département du Nord, sous prétexte de faire disparaître des signes de féodalité et des attributs de royauté*, por lo que se publicaría el Arreté qu'il será écrit au district de Douai, en lui rappelant le décret relatif à cet objet (la Célula de 24 de octubre de 1793), disponiéndose que *les monuments seront mis sous la surveillance des administrateurs de ce district; qu'ils seront avertis que les écarts en ce genre sont punissables*. El 25 de noviembre de 1794 sería publicado por la Comisión temporal de los Monumentos la ***Instrucción sur la manière d'inventorier et de conserver, dans tout l'étendue de la République, tous les objets qui peuvent***

---

<sup>1497</sup> RUCKER, F. *Les origines de la conservation des monuments historiques en France (1790 a 1813)*, París, 1913; LEON, P. *La vie des monuments français. Destruction, Restauration*, Ed. Picard, París, 1951.

<sup>1498</sup> MARTINEZ JUSTICIA, María José *Antología de textos sobre Restauración*, Universidad de Jaén, 1996, p.219-220.

*servir aux arts, aux sciences, et a l'enseignement.* Comezaría con una proclamación de los principios revolucionarios:

El depósito de obras nacionalizadas instaladas en el antiguo convento de Agustinos Menores (Petits-Augustins), bajo la supervisión del pintor Alexander Lenoir, desde el 15 de octubre de 1790, fue adquiriendo mayor complejidad, consiguiendo de la Convención, el 21 de octubre de 1795, cinco días antes de ser disuelta, la decisión de formar un verdadero museo, el Museum de los Monuments Franceses<sup>1499</sup>. El Museo sería clausurado en 1818. Como el museo de Lenoir se convertiría en un homenaje a las glorias pasadas de Francia (...) lo que sirvió para que los franceses descubrieran la historia de su país<sup>1500</sup>. **El 31 de agosto de 1801 (13 Fructidor, Un IX), el ministro del Interior, Jean-Antoine Chaptal,** presentaría a los cónsules de la República un informe sobre la creación de museos provinciales<sup>1501</sup>.

La configuración del Patrimonio Monumental Nacional en el proceso revolucionario francés (1789-1795).	Medidas legislativas	Tutela del Patrimonio Monumental.
1789	Abolición del régimen feudal (4 de agosto). Decreto de abolición del régimen feudal (11 de agosto). Declaración del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto). Nacionalización de los bienes eclesiásticos (2 de noviembre).	
1790	Decreto prohibiendo los votos religiosos, suprimiendo los votos contemplativos (13 de febrero). Constitución civil del Clero (12 de julio).	Decreto de 19 de junio de 1790 concerniente a las figuras de la Plaza de la Victoria (París). Establecimiento en el convento de los Petits-Augustins en forma de depósito de bienes de interés histórico y artístico procedentes de los conventos eclesiásticos suprimidos (5 de octubre). Decreto exigiendo que los departamentos inventarían y conserven los bienes confiscados,  La Convención nombra la Commission des Monuments (13 de

<sup>1499</sup> GREENE, Christopher M. Alexandre Lenoir and The Musée des monuments français during the French Revolution, French Historical Studies, Vol.12, N.2.1981, p.200-222.

<sup>1500</sup> BALLART, Josep.2006, p.181.

<sup>1501</sup> Le Role de l'Etat dans la constitution des collections des musées de France et d'Europe: Colloque du Bicentenaire de l'Arreté Consulaire dit Arreté Chaptal (14 fructidor an IX-1º septiembre 1801), Ministre de la Culture et de la Communication, 2003.  
Gazette nationale, 15 janvier, 15 fructidoran IX, n° 345

		octubre de 1790).
1791		<p>La Ley del 26 de mayo de 1791 creaba la lista civil del rey asimiló el palacio del Louvre a los monumentos de las artes y de las ciencias.</p> <p>Nominación oficial de Lenoir como guardador de los depósitos por orden de la Comisión de Administración de los bienes nacionales. Primer inventario de pinturas y esculturas (3 de junio).</p>
1792	<p>La Comuna insurreccional de París toma las Tullerías: caída de la Monarquía (10 de agosto).</p> <p>Decretos de la Asamblea Nacional sobre la caída de la Monarquía, la proclamación de la República y la Convención (10 de agosto).</p> <p>Abolición de las últimas órdenes religiosas (18 de agosto).</p> <p>Decreto sobre la abolición de la Monarquía (21 de septiembre).</p>	<p>Destrucción de los bienes artísticos e históricos de simbolismo feudal, concretamente el artículo 11 (14 de agosto).</p> <p>Carta fechada el 17 de octubre de 1792 por el Ministro Roland a David por el que se insita a la creación de un museo nacional con los bienes confiscados.</p>
1793	<p>Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (23 de junio de 1793).</p> <p>Constitución de 24 de junio de 1793.</p> <p>Decreto sobre la destrucción de Lyon (12 de octubre de 1793).</p>	<p>Decreto de la Convención disponiendo la destrucción de los sepulcros reales de la abadía de San Denis (1 de agosto de 1793).</p> <p>La Convención condena la destrucción de los bienes que habían pertenecidos a los estamentos privilegiados.</p> <p><i>Instruction sur la manière d'inventorier et de conserver dans toute l'étendue de la République tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l'enseignement</i>, Vicq d'Azyr, 15 de noviembre.</p> <p>Artículo 3 del Decreto de la Convención sobre la destrucción de la ciudad de Lyon, por el que se defenderá la <i>salvaguarda de los monumentos consagrados a la humanidad</i>.</p> <p><i>Observations de quelques patriotes sur la neccessité de conserver les monuments de la littérature et des arts</i>. Charles-Gilbert Romme (24 de octubre de 1793).</p> <p>Decreto de la Convención Nacional que défend d'enlever, de détruire, mutiler ni alterer en aucune manière, sous prétexte de faire disparaître les signes de feudañité ou de royauté, les livres imprimés ou manuscrits, les gravures et dessins, les tableaux, etc. (4 brumaire l'an 1, 24 de octubre de 1793).</p> <p>Rapport del diputado Mathieu, 18 de diciembre defendiendo el establecimiento de museos en toda la República.</p>

		Presenta un proyecto de decreto reemplazando la Commission des Monuments, acusado de patriotista, por la Commission <i>temporaire des arts</i>
1794		Ley de 25 de junio de 1794 por el que se crea el Archivo Nacional. Premier Rapport sur le vandalism presentado a la Convención (14 fructidor an II-31 août 1794), Abad Gregoire. Second Rapport sur le vandalism presentado a la Convención (8 brumaire an III, 29 octobre 1794), Abad Gregorie. Troisième raport sur le vandalisme (24 frimaire de l'an III, 14 décembre, 1794), Abad Gregorie.
1795		La Comisión Temporal propone la creación de una agence ambulante chargé de porter un oeil vigilant sur toutes les parties de la France (5 ventose an III, 23 février 1795). Apertura al público del Museo de Monumentos franceses y la publicación del primer Catálogo (1 de septiembre). Autorización oficial por la Comisión de Instrucción Pública de crear un museo "historique et cronologique de la sculpture française" (21 de octubre de 1795).

### 3.2.2. Los expolios napoleónicos y la génesis de la conciencia nacional del Patrimonio en el ámbito europeo de principios del siglo XIX. Las Cartas a Miranda de Quatrémere de Quincy.

El camino que emprendería durante los primeros años revolucionarios en el ámbito de la destemporalización y la descontextualización del Patrimonio culminaría en el periodo napoleónico, al despojar en sus conquistas de un amplio número de bienes históricos-artísticos de aquellos países conquistados para llevarlos a Francia con el objeto de concebir un museo de exaltación de las glorias nacionales, no ajeno por ciertos a amplias críticas que se van a producir por algunos sectores intelectuales. Con la añoranza de las hazañas del Imperio Romano, Napoleón asimila la concepción exaltadora de los bienes adquiridos en las conquistas.

#### - *La supuesta creación del museo napoleónico.*

La creación del Museo Napoleónico en 1803 donde se reuniera los principales objetos de las artes y de las ciencias se convertiría en el reflejo político de engrandecer la idea de una Francia victoriosa no solamente en los



campos de batallas sino incluso en el ámbito cultural<sup>1502</sup>. Como apunta Dyson *Las antigüedades se incorporarían a la colección del nuevo Museo Napoleón (el antiguo Louvre) (...) Aquel era un nuevo tipo de museo: no se trataba de una colección de hallazgos locales como los Museos Napolitanos o Vaticanos, y tampoco se parecía al gabinete privado del rey de Suecia. Era una colección representativa de las mejores obras de arte occidental, y estaba situado en el centro de la civilización: París.* El 8 de marzo de 1796 en la conquista de Lombardía a los austriacos firma una tregua con el duque de Parma por el que entregaría veinte pinturas. El 23 de mayo el duque de Módena se compromete con el armisticio de Salicetti, comisionado del ejército de Italia se establece la entrega de otros veinte cuadros. El 6 de mayo le pide al Directorio que le manden un comité de expertos para que elijan las obras de arte que debían ser confiscadas y unos días después, el 11 de mayo, sería nombrado unoss Comisarios de gobierno asignadas al Ejército de Italia recueillir tous les renseignements possibles sur l'agriculture et les sciences, et faire passer tous les monuments transportables des sciences et des arts qu'elles croiront dignes d'enter dans nos musées et nos bibliothèques. El 13 de mayo son nombrados cuatro comisionados, mdos científicos, Thouin y Lacepede, y dos artistas, Jean-Baptiste Regnault y el escultor Moitte, que serían sustituidos el día 14 con un número de seis: Monge, Berthollet, Thouin, Labillardiere. Claude-Louis Berthollet y Gaspard Monge (1746-1818) se convierte en las figuras transcendentales a la hora de adquirir las obras de artes confiscadas. El 23 de junio de 1796 el Papa firma el armisticio de Bolonia, por el que paga veinte millones y un botín de cien cuadros de cent tableaux, bustes, vases o statues, au choix des commissaires. El 29 de junio de 1796 el Comité llega a Roma, seleccionando algunas estatuas clásicas, entre las que se encontraría el famoso Torso de Belvedere y la Transfiguración de Rafael. La hostilidad de la población haría que se rompiera el tratado. Unos meses después se firmaría el Tratado de Tolentino en 1797, que en su artículo 8 del armisticio de Bolonia firmado entre Pío VI y Napoleón como representante del Directorio, confirmada en, por el que se establecía: *El Papa entregará a la Republica Francesa cien cuadros, bustos, vasos y estatuas a elección de los comisarios que se enviarán a Roma, entre cuyos objetos estarán comprendidos el busto de bronce de Junius Brutus, el de Marcus Brutus en mármol, los dos situados en el Capitolio (...)*<sup>1503</sup>, así hasta más de cien obras de arte y quinientos manuscritos que habrían de escoger los comisarios franceses<sup>1504</sup>. El 17 de septiembre de 1797 sería disuelto el Comité. El 26 de abril de 1798 el Directorio considera que *les chefs-d'oeuvre recueillis en Italie sont les fruits*

---

<sup>1502</sup> DYSON, 2008, p.41.

<sup>1503</sup> El texto está recogido en MACARRON MIGUEL, Ana Mª *Historia de la conservación y de la restauración*, 1997, p.111.

<sup>1504</sup> Las obras serían enviadas a Francia en cuatro convoyes que, una vez reunido en Livorno, fueron cargadas a bordo de una fragata francesa que los condujo hasta Marsella, llegando a París el 27 de julio de 1798, desfilando de forma espectacular por los Campos de Marte, como si de un antiguo triunfo romano se tratara.

*les plus précieux de nos conquêtes, et l'éternel témoignage de la puissance de la republique française; que le Gouvernement à l'époque de leur arrivée à Paris doit manifester son intention constante de servir et de protéger les sciences et les arts; arrête ce qui suit.* En el artículo primero de la disposición se establecería que Les objets et des arts recuells en Italie seron reçus dans Paris avec pompe et solennité. El convoy llega a París el 27 de julio de 1798 la llamada Fête des Arts para celebrar la entrada proveniente de Roma<sup>1505</sup>. Sin embargo, a pesar del expolio que va a suponer las campañas napoleónicas, la configuración del Museo Parisino abrió el camino de la conciencia de crear museos públicos por todo el ámbito geográfico europeo.

*- Un debate doctrinal sobre la protección de los bienes de interés histórico y artístico en el ámbito del derecho internacional: Las Cartas a Miranda de Quatrémere de Quincy.*

El expolio patrimonial llevado a cabo por las tropas napoleónicas despertaría la conciencia nacional en los países ocupados, y la valoración subjetiva de los pueblos que veían en los bienes confiscados la pérdida de sus propias raíces históricas, que fundamentaba en cierta forma su propia existencia como identidad individualizada. Al mismo tiempo, que despertó en las masas francesas un verdadero júbilo al ser testigo de la llegada de múltiples obras artísticas procedentes de Italia, Bélgica, Alemania o Austria, se despertó una fuerte corriente de oposición entre los intelectuales, entre los claros defensores de la existencia de un patrimonio francés que estaría formado incluso por bienes adquirido con las conquistas militares y los que por el contrario se oponían a esta concepción basada en el despojo patrimonial, e incluso defenderían la existencia de un patrimonio nacional. Bazin trata de justificar la confiscación de las obras de artes de los países invadidos tanto en la etapa del Directorio como a raíz de las campañas napoleónicas, con el cosniguiante proyecto de convertir a París en la capital de las artes, al igual que anteriormente lo había sido Roma: *El nombre de Napoleón ha permanecido unido al de estas requisas de obras de arte en toda Europa y continúa creyéndosele responsable de estas expoliaciones. En realidad, si sus victorias lo permitieron, el Directorio fue el que tuvo la iniciativa(...) La Francia revolucionaria, atacada por Europa y convertida en conquistadora ante la amenaza de la invasión, la conquista de las obras de arte era un honor del vencedor y una forma de compensarse de las pérdidas sufridas en hombre y en bienes por obra del enemigo. A consecuencia de las victorias de Bonaparte, la ideología revolucionaria, en lugar de estar a la defensiva, se convirtió muy pronto en expansiva y pareció normal que París fuese la metrópolis de las artes de esta nueva Europa.* Lo cierto es que al igual que había ocurrido con la

<sup>1505</sup> SAUNIER, Carlos *Les Conquetes artistiques de la Revolution et de l'Empire, 1865.*

<sup>1506</sup> En 1794, el pintor francés Luc Barbier, justificó la apropiación militar del arte por parte de la República al considerar que los pueblos conquistados tenían una identidad cultural inferior, por lo que no eran dignos de gozar de sus bienes históricos ancestrales, más aún al no haber expulsado a la monarquía absolutista y no haber adoptado el nuevo sistema de gobierno. En contraposición a esta tesis, el escultor francés Louis-Pierre Deseine defendería la identidad nacional de los monumentos *Los monumentos artísticos son comparables a ciertas plantas indígenas que no resisten ser trasplantadas. El encanto de todos los monumentos proviene del lugar en que se exponen y del que no pueden moverse sin morir o despojarse de toda su relevancia histórica, moral y política. Es el destino de un monumento el que le da su belleza y donde debe valorarse: solo allí puede el historiador entrar en diálogo con él y descubrir las causas de su existencia; sólo allí el monumento será testimonio de la prosperidad de estado de las artes y del espíritu de la época en que se produjo.*

Sería el artista e historiador del arte Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849) quien con más se opondría a la política de confiscación que había realizado Francia y otros países anteriormente. En 1796 junto con otros artistas entre los que se encontraban los arquitectos Fontaine y Percier, los pintores Valenciennes y David firmó una petición dirigida al Directorio contra la extracción de arte desde Italia. Ese mismo año escribiría al general Miranda, exponiéndole sus ideas sobre los expolios artísticos que había provocado sus tropas en Italia, quedando proyectado en su bello libro *Les Lettres sur le préjudice qu'occasionneroient aux Art et à la Science le déplacement des monuments de l'art de l'Italie, les démembrement de ses Ecoles et la spoliation de ses Collections, Galeries, Musées*, Cartas a Miranda, una colección de siete cartas dirigida indirectamente al general Miranda, un general de las tropas francesas en Italia, para sensibilizar sobre la pérdida patrimonial sufrida por las naciones sometidas, se considera actualmente vigente en sus reivindicaciones, como fueron la conservación in situ, la preservación de los sitios históricos, la restitución o repatriación del patrimonio expoliado, la mercantilización del arte y el cosmopolitismo de la cultura. Su argumento central era que el traslado de las obras antiguas y renacentistas, extraídas de su contexto histórico, desvirtuaba su sentido. Al desvincularlas de sus ubicaciones originales y al colocarlas en museos, se convertían en sagradas reliquias sobredimensionadas como si fueran mercancías: *Cree Vd. que el pueblo que se viere arrebatarse su propiedad más nacional, la más sagrada, la más inviolable de todas, no abandonaría las difíciles y costosas investigaciones de las que se les robaría la*

---

<sup>1506</sup> BOYER, Ferdinand, Les responsabilités de Napoleon dans le transfert des œuvres d'art de l'étranger à Paris, *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, XI, 1964, pp.241-262.

*fama y el beneficio natural?*<sup>1507</sup>. Sería el primero en formular la idea de que el objeto tenía que estar situado en su lugar de origen: *El museo de Roma perdería en las figuras que lo forman (...) el museo que se formase en otro lugar con estos desmembramientos no tendría la unidad ni la base que puede conferir a estos fragmentos el valor necesario*. Unos cincuenta artistas, entre los que se encontraba David, firmaron una petición al Directorio ejecutivo dando apoyo a la tesis de Quatremère<sup>1508</sup>.

Un grupo de artistas se opondría a sus tesis, afirmando que Francia era el único lugar apropiado para las obras del genio libre. En sus planteamientos se refleja una visión de supremacía de lo francés sobre los demás pueblos europeos, concretamente el italiano, Iº. Cuanto más perjudicial parece ser nuestro clima para las artes, más necesidad tenemos de modelos para vencer los obstáculos que podrían oponerse, en nuestra casa, a su progreso (...) Los romanos, antaño toscos, lograron civilizar su nación trasplantando en su tierra aquellas producciones de la vencida Grecia. Siguiendo su ejemplo, aprovechemos nuestras conquistas, y traspasemos de Italia a Francia todo lo que pueda engrandecer la imaginación. ¡Que los obeliscos egipcios vengan a adornar nuestras plazas y a atestiguar nuestros triunfos sobre Europa entera, cobardemente conjurada contra un solo pueblo! Si en el siglo pasado una multitud de artistas de todo tipo casi ha igualado a los antiguos, si nuestra actual escuela, sin exceptuar la italiana, es aún la mejor que existe, ¿Qué no hará el genio francés ayudado por todos los refuerzos que el gobierno reúne de todas partes? 2º. Admitiendo que sólo en Roma se puede admirar estas obras maestras, ¿Qué garantía se nos dará de la liberalidad y de la sinceridad de los romanos? ¿Quién nos certificará la futura tranquilidad de Italia? Como apunta Daniel Rico *la naturaleza y calibre de la influencia de Quatremère en la Europa de su tiempo es un tema que convendría estudiar*. En la propia Francia la impronta de sus tesis se reflejan en algunos textos del escultor Louis- Pierre Deseine, la *Lettre sur la sculpture destinée à orner les temples consacrés au culte catholique, particulièrement aux tombeaux* (París, 1802), y la *Opinión sur les musées, où se trouvent retenus tous les objets d'arts qui sont la propriété des temples consacrés a la religion catholique* (París, 1803), donde se opondría a la actitud del Estado francés revolucionario sobre las obras religiosas expoliadas, criticando la museística de Lenoir, pidiendo la devolución del arte sagrado al que consideraba su legítimo propietario, la Iglesia. Incluso Daniel Rico sugiere que la influencia de Quatremère pudieron inspirar la orden pronunciada el 21 de abril de 1813 por el tribunal del Almirantazgo de Halifax, de restituir a la Academia de Bellas Artes de Filadelfia, a los que iban destinados, los cuadros y grabados italianos capturados por los ingleses a un

<sup>1507</sup> QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoine-Chrysostome, *Letres à Miranda sur les déplacements des monuments de l'art de l'Italie*, 1796, edited by Edouard Pommier, París, Maseula, 1989.

<sup>1508</sup> SHINER, Larry *La invención del arte. Una historia cultural*. Paidós Estética, 36, p.255.

navío americano, al considerarlos *not as peculium of this of that nation, but as the property of mankind at large, and as belonging to the common interests of the whole species*, considerándose la primera decisión judicial conocida en que “the art and sciences are admitted amongst all civilized nations, as forming an exception to the severe rights of warfare, and as entitled to favour and protection.

***- Las disposiciones del Congreso de Viena en el ámbito de la tutela pública del Patrimonio Monumental.***

La obra de Quatremère de Quincy influyó sin duda alguna en la posición que tomó el Congreso de Viena sobre la devolución de las obras de artes que habían sido expoliadas de sus países de orígenes en la etapa napoleónica. No cabe duda que se convierte en un hecho inaudito en el coleccionismo de guerra en el ámbito occidental, por lo que podemos considerar que asistimos con ello a la génesis de un derecho internacional de protección del Patrimonio Histórico-Artístico, que tendría su prolongación posteriormente en los expolios imperialistas que se producirían en el fenómeno colonizador. La cuestión de suma importancia para comprender la definitiva configuración del Patrimonio Histórico-Artístico como Bienes Nacionales, del país de origen, no ha sido suficientemente tratada por la historiografía nacional, siendo analizada en los últimos tiempos en la tesis de X. Perrot, quien ha estudiado el proceso con detenimiento<sup>1509</sup>.

Una de las cuestiones primordiales que se van a plantear desde el punto de vista jurídico será el hecho de que muchas de las obras requisadas por individuos particulares, habían adquirido un derecho de propiedad sobre los mismos, por lo que su restitución se oponía en principio con la esencia de unos de los derechos civiles primordiales que iba ganando terreno en la nueva Europa preliberal, nacida con la derrota napoleónica. Sin embargo, un gran número de obras volverían a su ubicación original, como fue en el caso de los bienes históricos-artísticos, que había pertenecidos a los Estados Pontificios, sobre todo las esculturas clásicas del Laocconte o el Apolo de Belvedere. Sin embargo, los franceses se opondrían e incluso algunos miembros de la coalición antinapoleónica se opondrían a su restitución, ya que temían que debilitaran la institución monárquica recién instalada en Francia<sup>1510</sup>. Se nombraría una comisión de restitución de los bienes expoliados bajo la dirección del pintor Canovas a quien se uniría Quatremère de Quincy y Hamilton. Casi todas las obras de la Antigüedad volverían al Vaticano. La medida debemos de considerarla como un paso trascendental en el ámbito del

---

<sup>1509</sup> PERROT, X. *De la restitution internationale des biens culturels aux XIX et XX siècles: vers une autonomie juridique*, tesis doctoral, Universidad de Limoges, 2005.

<sup>1510</sup> BOYER, Ferdinand, Louis XVIII et la restitution des œuvres d'art confisquées sous la Revolution et l'Empire, Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, 1965, pp.201-207. Blumer, Marie-Louise *La commission pour la recherche des objets de sciences et arts en Italie (1796-1797)*, París, 1934.

derecho patrimonial al considerar un bien histórico-artístico no solamente como propiedad nacional cuya propiedad debía de ser respetada por los demás Estados al considerarse como símbolo de su identidad como nación. En otros países el restablecimiento de los bienes nacionales después del expolio napoleónico no llegaría a realizarse, como fue el caso de España.

### **3.2.3. El derecho de la propiedad privada en el coleccionismo artístico bugues de la Francia Revolucionaria.**

No podemos afirmar tajantemente que el mercado artístico entre particulares naciera en los orígenes de la Francia contemporánea, ya que prácticamente compra y venta de bienes de interés histórico-artístico evidentemente siempre lo hubo, pero si podemos precisar que con la irrupción de la propiedad privada como nuevo instrumento jurídico en el tráfico de bienes materiales y su consiguiente desvinculación irrumpe el llamado mercado artístico contemporáneo, con instituciones organizativas, formado por una legión de marchantes, galeristas, coleccionistas, incluso los propios creadores de las obras, donde se van a ir intercalando una red de derechos y obligaciones que tendrán como base jurídica el derecho de disposición y gozo el adquirente en su esfera privada, lo que supondrá que quedará fuera del tráfico jurídico en la medida que lo desee su propietario, por lo que en principio no podrá intervenir el propio Estado. Desde esta perspectiva se están poniendo las bases de considerar al Patrimonio Monumental que aparezca insertado en el seno de la propiedad privada como un derecho inherente al propietario, vinculado solamente a su persona, por lo que se unen en un binomio perfectamente delimitado la tutela y el régimen de propiedad privada de los bienes. En todo caso el interés general quedará diluido en algunas ocasiones a limitar la exportación de los bienes históricos-artísticos, que en la mayoría de los casos no se cumplen, probablemente como reflejo del espíritu general del ordenamiento jurídico de limitar el derecho absoluto del derecho de la propiedad privada siempre que no se oponga a los intereses de la colectividad.

### **3.3. La consagración del derecho absoluto de la propiedad comoprincipio ordenador del sistema normativo y su proyección en la tutela del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal.**

El fin del proceso revolucionario liberal en Europa a partir de 1848 va a significar la consagración definitiva del llamado Estado Liberal fundamentado políticamente en la exaltación de los valores de la burguesía, en la que el derecho de la propiedad privada va ir quedando insertado como uno de los principios informadores del organigrama jurídico-social, incluso dándole un contenido puramente social al considerar que sería este derecho el que da contenido jurídico a todo el orden social. Al mismo tiempo se va a ir intensificando el papel del Estado como sujeto político, aunque limitado en su actuación en muchos momentos a un mero comodín de los intereses privados, y



convirtiéndose en otros casos en un sujeto privado que busca defender sus intereses, por lo que se produce una situación en la que el Estado va a formalizando su propia identidad, cuya legitimidad va a buscarla en sus propias raíces de su existencia, alentando por consiguiente un nacionalismo, que va a terminar cuajando en el modelo del Estado-Nación que no quebrará definitivamente hasta la I Guerra Mundial. Los conflictos de intereses entre los sujetos privados (los ciudadanos) y el propio Estado-Nación que en muchas ocasiones va a actuar como sujeto privado, ignorando la función social, e instando por el principio del nacionalismo se convierte en el verdadero eje del ordenamiento jurídico del Estado Liberal en la segunda mitad del siglo XIX, prolongándose en la mayoría de los casos hasta los albores del siglo XX.

El conflicto jurídico entre los intereses privados y los estatales se va a reflejar en el ámbito de la tutela jurídica del Patrimonio Monumental. Sin ningún tipo de funcionalidad social, el Estado-Nación irá diseñando una nueva concepción jurídica del Patrimonio Monumental, el Monumento Histórico-Artístico Nacional, un bien instrumentalizado por los intereses del propio Estado, en función de los valores ideológicos del nacionalismo político, que le ayudará a fundamentar ideológicamente los intereses estatales frente a los particulares. No podemos hablar en cierta forma de un pleno interés público a la hora de la tutela de estos bienes sino de un interés nacional en base a las pretensiones de los intereses del Estado como ente individualizado más que como una verdadera política cultural de funcionalidad social. No cabe duda que se va a ir perfilando paralelamente un verdadero Derecho Privado del Patrimonio Monumental, en la que los bienes históricos-artísticos entran a formar parte como bienes materiales de la esfera privada que es casi imposible la irrupción de la Administración a la hora de protegerlos públicamente. Sin embargo, durante esta etapa se va a ir articulando un sistema normativo, muy exhaustivo, especialmente en Francia e Italia, con unas fuentes del derecho definidas por una amplia producción normativa, bien a través de leyes ordinarias, bien a través de un gran número de reglamentos, aunque el límite de la propiedad privada siempre será un obstáculo en las pretensiones del Estado sobre el Patrimonio Monumental, aunque ya a aparecerán las primeras limitaciones en la exportación de bienes considerados de interés nacional (no podemos hablar todavía de utilidad pública). La literatura histórica-artística así como la incipiente crítica artística prepararían el escenario contextualizador para la configuración jurídica del Patrimonio Nacional. El literato francés Víctor Hugo ya define la existencia de un doble uso en un bien inmueble de carácter histórico-artístico: *Hay dos cosas en un edificio, su uso y su belleza. El uso pertenece al propietario; la belleza, a todo el mundo. C'est donc dépasser son droit que la détruire.* En la misma línea, Goethe sostendría en 1813 con tintes claramente románticos que *las producciones de valor auténtico presentan este carácter por el que pertenecen a la Humanidad entera (...)* La ciencia y el arte

*pertenecen al mundo, y delante de ellos, desaparecen la barrera de la nacionalidad*<sup>1511</sup>.

### **3.3.1. La construcción del Patrimonio Monumental como bien inherente al propietario.**

*- La consagración del derecho de la propiedad privada como derecho absoluto y sus controversias con el principio de interés nacional en la delimitación del Estado-Nación.*

La impronta del Código Civil Napoleónico va a quedar plasmada en la codificación civil de los estados liberales en los decenios centrales del siglo XIX. La llamada Escuela de Exégesis fueron los impulsores de la implantación de la concepción cerrada del derecho de la propiedad privada. En el artículo 11 del Código Austriaco de 1811 dice que la propiedad es la facultad de disponer a voluntad de la sustancia y de los provechos de una cosa y de excluir de ella a todos los demás. En el Código Italiano de 1865 en su artículo 436 se va a definir el derecho de la propiedad con una clara influencia del Código Napoleónico, concretamente del artículo 544. Azcarate en su ensayo sobre la historia de la propiedad y su estado actual en Europa de 1879 nos deja constancia de la conceptualización del derecho de la propiedad privada en este periodo<sup>1512</sup>. El contenido del derecho de la propiedad privada se convierte en el derecho subjetivo por excelencia, comprendida en dos connotaciones genéricas: gozar y disponer<sup>1513</sup>. Bassols precisa como el carácter inviolable de la propiedad inmunizaba a la institución frente a las intromisiones del poder estatal, a excepción del supuesto extremo de la expropiación justificada por razones de utilidad pública, y su condición de auténtico derecho civil le otorgaba una legitimidad basada en la ley frente a los antiguos privilegios, a la par que permitía presentarse como un modelo unitario y universal de goce y disposición sobre todo tipo de bienes (muebles, inmuebles, inmateriales e intelectuales). La dogmática civilista proyectó esta ideología sobre los instrumentos suministrados por la concepción romana del dominio, erigiendo a la propiedad en la encarnación y representación del derecho subjetivo por antonomasia con capacidad de exclusión de los intereses de terceros y de la propia sociedad, a excepción de los tasados supuestos de la expropiación. Mientras la Constitución garantizaba la propiedad de los ataques externos procedentes de los poderes estatales, la Codificación Civil desde su concepción individualista la liberaba definitivamente de los vínculos feudales y facilitaba su inserción en el proceso productivo, pudiéndose afirmar que el movimiento codificador cumplió la función de auténtica Constitución material de la propiedad y, en definitiva, del orden económico<sup>1514</sup>.

<sup>1511</sup> GOETHE, Johann Wolfgang *Viajes italianos*, en Obras Completas, T.III., 4º edic, Madrid, 1987.

<sup>1512</sup> AZCARATE, *Historia de la propiedad y su estado actual en Europa*, 1879.

<sup>1513</sup> MONTÉS, Vicentem *La propiedad privada en el sistema del derecho civil contemporáneo*, Editorial Civitas, 1980.

<sup>1514</sup> BASSOLS COMA, Martín *Constitución y sistema económico Temas Claves de la Constitución Española*. Tecnos, Madrid, 1985, p.113.

La recepción del concepto de dominio en la codificación decimonónica. La concepción de la propiedad que se plasma en el artículo 554 del Code Civil francés ejercería una influencia considerable, al ser aceptada en la mayor parte de Europa. De esta manera el Código Civil italiano de 1865 se considera tradicionalmente una traducción literal del francés, al disponer en su artículo 436 que la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti, por lo que los primeros comentaristas italianos, la llamada paleocivilística italiana, formularían los tres caracteres esenciales de la propiedad: el absolutismo, la exclusividad, la perpetuidad-irrevocabilidad, asumiendo su defensa como un derecho ilimitado, afirmación solamente limitada por las prohibiciones establecidas por la ley, por lo que ya algunos civilistas empezarían a plantearse la necesidad de relativizar los intereses de los propietarios con los intereses públicos. Posteriormente, en el Código Civil portugués de 1887 configuraría a imitación del francés el derecho de la propiedad en un derecho absoluto, concretamente su artículo 2.167 que lo define como la facultad, que el hombre, tiene, de aplicar a la conservación de su existencia y al mejoramiento de su condición, todo para cuanto ese fin adquirió legítimamente y de lo que, por tanto, puede disponer libremente. Al mismo tiempo el artículo 2169 precisaba que el derecho de la propiedad abarcaba el derecho de exclusión; el derecho de transformación; el derecho de defensa; el derecho de restitución e indemnización y el derecho de alineación. Ya en el artículo 2360 que el propietario podía ser expropiado de sus propiedades, todo o en parte, por motivo de utilidad pública, mediante la correspondiente indemnización. En la codificación alemana, encontramos una misma configuración jurídica, que parte de las concepciones teóricas de Savigny que lo identifica como un derecho subjetivo, y que se insertaría en el Código Civil de 1896<sup>1515</sup>.

El movimiento revolucionario de 1848 asume hasta cierto punto las reivindicaciones sociales que hubieran generado una concepción social de la propiedad privada. Ante esta perspectiva sociopolítica, van surgiendo nuevas tendencias en el ámbito del pensamiento occidental que irá diluyendo la concepción unívoca del derecho ilimitado del derecho de la propiedad privada, especialmente desde la novedosa perspectiva que va a suponer las concepciones del materialismo histórico. Ya en la etapa moderna, sería Rousseau el que criticaría el sentido moderno de la propiedad privada, al considerarla la causa de la desigualdad de los hombres. No muy distanciada estaría la idea de Proudhon y del socialismo crítico-utópico al considerar que la propiedad privada debería ser sustituida por formas de propiedad colectiva. Las tesis de Marx y Engels fueron las más divulgadas y conocidas. Como apunta Danilo Zolo Marx no criticó nunca la propiedad como tal, ni propuso su

---

<sup>1515</sup> LOBATO GOMEZ, José Miguel *Propiedad privada del suelo y derecho a edificar* Editorial Montecorvo. Madrid, 1989, pp.67-73.

abolición. Su crítica estará centrada a la propiedad privada de los medios de producción que constituía la clave de la economía capitalista<sup>1516</sup>. En los *Manuscritos* escrito por Karl Marx ya pondría en tela de juicio la propiedad privada como autorrealización del espíritu humano: *El comunismo como superación de la propiedad privada (...) es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación*. La propiedad privada se convierte en el responsable de la *enajenación de nuestros sentidos determinado por el predominio absoluto de la posesión, del tener; la propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales que un objeto sólo es nuestro cuando lo tenemos, cuando existe para nosotros*<sup>1517</sup>, por lo que su contraposición al carácter privado de la propiedad burguesa será tajante: *La superación de la propiedad privada es por ello la emancipación plena de todos los sentidos y cualidades humanas*.

De nuevo Paolo Grossi nos da la clave de la superación que poco a poco se fue dando sobre el derecho ilimitado de la propiedad privada como eje intocable del ordenamiento liberal: *Entre fuertes luchas sociales y las cada vez más apremiantes pretensiones del proletariado que se desarrollan en toda Europa, el Estado burgués, el Estado monoclasa, no puede sino registrar los cambios. Aparece – primero tímidamente, después de manera arrolladora- una legislación especial en las que –sueitas y fuertes- las instancias sociales son recibidas y absorbidas por el orden jurídico. La llamada legislación social no se acuña en las tramas de los códigos, que formalmente permanecen intactos con su sólida estructura de situaciones abstractas y de categorías lógicas. El código privado social, un proyecto de unos pocos herejes, fue rechazado indignamente, pero el hecho es que al mensaje formal y purificado de los códigos se añade una legislación especial llena de hechos sociales y económicos. El propietario debe ahora enfrentarse con ella, y el derecho subjetivo –el máximo de los derechos subjetivos- sufre los primeros efectos. Las instancias sociales ponen límites a los poderes del propietario, hacen de su derecho algo muy diferente del simple derecho anterior, lo convierten en una situación compleja*<sup>1518</sup>. En 1864 se publica una obra emblemática, *La ciudad antigua* de Fustel de Coulanges, defendiendo la impronta que el derecho de la propiedad privada tuvo en la configuración de la sociedad clásica: *He aquí una antigua institución de la que no debemos formarnos idea por lo que pasa entre nosotros. Los antiguos formaron el derecho de la propiedad en principios que están lejos de ser lo que hoy respetamos, y, naturalmente, sus leyes se diferenciaban bastante de las nuestras (...). No pudiendo el hombre, al menos sin gran dificultad, deshacerse de su tierra, con mayor razón no se le podía despojar de ella a la fuerza. Era desconocida entre los antiguos la expropiación por causa de utilidad pública, y la confiscación solo se practicaba como consecuencia de la pena del destierro; es decir, cuando despojado el individuo de su título de ciudadano, carecía de capacidad legal para ejercitar ningún derecho sobre*

<sup>1516</sup> ZOLO, Danilo *Libertad, propiedad e igualdad* FERRAJOLI, Luigi Los fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2007.

<sup>1517</sup> MARX, Karl, *Manuscritos, Economía y sociedad*, Madrid, Alianza, 1986, p.108.

<sup>1518</sup> GROSSI, Paolo, pp.131-132. En una misma línea podríamos encontrar la obra de juventud de Marx *La cuestión judía*, donde hace una crítica de la posición jurídica burguesa de la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. MARX, C. *Escritos de juventud*, en Obras fundamentales de Marx y Engels, 1, FCE, México, 1982, p.487.

*el suelo de la ciudad (...) la tierra es inseparable de la familia, y es más fácil poner al hombre en servidumbre que quitarle su derecho de propiedad. Tan alto y tan inviolable era este derecho*<sup>1519</sup>. Desde el propio Estado Liberal se va fraguando una nueva visión de la llamada cuestión social. Sería Lorenz von Stein en 1850 con la publicación de su obra *Geschichte der sozialen Bewegung* quien defendería la tesis de que ya se había culminado la época de las revoluciones y de las reformas políticas para comenzar las de las revoluciones y las reformas sociales<sup>1520</sup>. En Norteamérica, los derechos de la propiedad solo formaban parte de una esfera en la que, a mediados del siglo XIX, los derechos sociales sobresalían ampliamente. Así en 1851, Lemuel Shaw, magistrado del Estado de Nueva York pronunciaba una sentencia que puede ayudarnos a comprender la existencia, aunque minoritaria, de una nueva concepción del derecho de la propiedad: *Toda propiedad en esta república, deriva directa o indirectamente del gobierno y se mantiene sometida a estas reglas generales, que son necesarias para el bien común y el bienestar general. Los derechos de propiedad, al igual que otros derechos sociales y convencionales, están sometidos a tales razonables limitaciones en su disfrute por lo que, de la misma manera que se proveerá para evitar que sufran daños o perjuicios, se han establecido mediante ley estas reglas y restricciones que el legislativo, cuyos miembros están investidos por la Constitución del poder de gobernar y controlar, puede considerar necesaria y convenientes. Unos años antes, la Constitución de Nueva York de 1821 prescribía que ninguna persona será privada de la vida, libertad o propiedad sin un proceso legal; la propiedad privada no será expropiada para uso público sin una justa compensación*<sup>1521</sup>.

**- La configuración del Monumento Histórico-Nacional como fundamento jurídico-ideológico del Estado Nación.**

Chaoy sostiene como la década de 1820 marca la afirmación de una mentalidad que rompe tanto con aquella de los anticuarios como con la actitud de la revolución francesa. A partir de la década de 1850 –y a pesar de los desfases de su industrialización– el monumento histórico es consagrado por la mayoría de los países europeos<sup>1522</sup>. El Patrimonio Histórico-Artístico como identidad de la burguesía del Estado Liberal. La burguesía en el término amplio de la palabra, se ha insertado plenamente en los sistemas productivos con el proceso de la industrialización, en los modelos políticos, con la gestación del nuevo estado liberal e incluso va a establecer los principios jurídicos en que se fundamenta la renovada estructura política basado en la igualdad jurídica y el derecho de la propiedad privada. Al mismo tiempo va a ir diseñando un modo de vida que se proyectará en la configuración de un modelo cultural que irá

---

<sup>1519</sup> COULANGES, Fustel de *La ciudad antigua*, Editorial Edaf, Madrid, 1996, p. 78.

<sup>1520</sup> GARCIA PELAYO, Manuel *Las transformaciones del Estado contemporáneo* Alianza Universidad, Madrid, 1996, p.50.

<sup>1521</sup> DIPPEL, Host *Constitucionalismo moderno*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009, pp.203-205.

<sup>1522</sup> CHAOY, p.115.



impregnando a amplias capas de la sociedad, sustituyendo al mismo tiempo los gustos estéticos que había definido la aristocracia.

A priori este análisis quedaría superficialmente zanjado el problema de la burguesía como el eje de todo el proceso revolucionario sin más, ya que en su concepción va a existir una diversidad de variantes que diluye un sentido uniforme del propio término. La historiografía actualmente discrepa sobre la divergencia en el concepto utilizado como burguesía, incluyendo los términos de *sociedad burguesa* y *carácter burgués*. La expresión sociedad burguesa hacía referencia a *un modelo de orden social, económico y político que, superando el absolutismo, los privilegios estamentales hereditarios y la tutela clerical, hace realidad el principio de libertad individual jurídicamente regulada para todos, garantiza la convivencia de los hombres de acuerdo con los dictados de la razón, organiza la economía sobre la base de una competencia regulada de acuerdo con el mercado, distribuye las oportunidades, en el sentido más amplio, según los méritos y capacidad, limita por una parte el poder del Estado según los principios liberales del Estado de derecho y del Estado constitucional, mientras que por otra atiende a la voluntad de ciudadanos responsables al organizar la vida pública, las elecciones y los órganos representativos a la vez que estructura el ámbito del arte, la ciencia y la religión (confiriéndole a la vez un alto grado de autodeterminación)*. Por Carácter Burgués de una sociedad se entiende por la manera de medir *o bien por el grado de influencia que ha alcanzado la burguesía o bien por la medida en que responden a ese modelo de sociedad burguesa*<sup>1523</sup>.

Sin embargo, ya Gerhard Haut en el Dictionnaire universal Larousse precisaría que *solo la Europa moderna ha conocido la burguesía, y en Europa solo es Francia l país que ha tenido el desarrollo más completo de esta institución... Alemania tuvo sus ciudades libres, Inglaterra su cámara de los Comunes, pero Francia entera se hizo burguesa y tercer estado*. François Furet añadiría que *La Revolución Francesa inventó al burgués emancipado de la política. La Revolución Industrial, nacida en Inglaterra, diseminada aquí y allá por el continente, hace surgir al burgués emancipado por el capital. Estas dos imágenes no son coincidentes: el burgués francés, que ha vencido a la aristocracia, no ha transformado su moda de vida, y Balzac lo describe como hambriento de tierra, rentista, comerciante, un poco al estilo de su antepasado del Antiguo Régimen*. En el propio siglo XIX ya existía una conciencia del papel significativo que va a tener la burguesía, como se puede observar en el trazo evolutivo que Friedrich Engels haría en el prólogo de la versión inglesa de su obra *Del socialismo utópico al socialismo científico*:

Habberman convertirá al burgués en el protagonista de la acción revolucionaria que llevará a la verdadera transformación de la sociedad europea salida de la crisis del Antiguo Régimen, y que irá moldeándose hasta su definitiva consagración en los años centrales del siglo XIX hasta la I Guerra

<sup>1523</sup>FRADERA, Josep María; MILAN, Jesús y GARCIA VALERA, Jesús Millán *Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad Civil, política y cultura*. Biblioteca Nueva. Universidad de Valencia



Mundial. Desde esta perspectiva podemos distinguir tres etapas fundamentales: una Burguesía Revolucionaria, que arrancaría desde la Revolución Francesa desde 1789 y que culminaría en el proceso revolucionario de 1848; una segunda etapa protagonizada por el conservadurismo de la burguesía que se encerraría en su propia identidad frente a toda amenaza de que se debilitara el orden político-jurídico alcanzado, que llegaría hasta 1870 con la irrupción del movimiento comunero en París y finalmente una tercera etapa en la que entraría en la escena política los sectores sociales más desfavorecidos con el orden político precedente, por lo que el protagonismo exclusivo de la burguesía quedaría en entredicho, entrando en crisis el sistema jurídico-político del Estado Liberal que culminaría con el desenlace de la I Guerra Mundial en 1914.

Etapas Históricas	Tipología de Estado	Sociedad Burguesa	
1789-1848	Estado Liberal inicial	Burguesía Revolucionaria	
1848-1870	Apogeo del Estado Liberal	Burguesía conservadora	
1870-1914	Crisis del Estado Liberal	Crisis de la sociedad burguesa	

La Europa de la segunda mitad del siglo XIX asiste sin ninguna duda a un florecimiento de lo que la historiografía clásica ha definido como el principio de la nacionalidad de lo que se deduciría la consagración de los llamados Estados-Naciones, concretamente desde 1848 y la década de 1870<sup>1524</sup>. La primavera de los pueblos despertarían la conciencia de aquellos pueblos que hasta este momento habían quedado subyugados por los imperios territoriales de la Europa Continental, fenómeno que incluyó se proyectaría fuera de los propios límites territoriales, ya que la guerra civil americana se consideraría una manera de mantener la unidad de una nación recién creada que estaba viviendo procesos disgregadores e incluso con la aparición de la Japón Meiji se observan movimientos nacionalistas<sup>1525</sup>. La idea de *lo nacional* se extendería por todo los rincones de Europa.

El término-concepto de nación que en la etapa de la revolución era todavía intercambiable con el de Pueblo, vendrá a asumir un significado

---

<sup>1524</sup> En el conocido libro de Eric Hobsbawm *Nación y nacionalismos* desde 1780 se marca la génesis del nacionalismo y del Estado en 1789. Smith anota que la mayoría de los historiadores optan por 1789, con la precisión de que la Revolución sirvió simplemente para hacer cristalizar los elementos de la idea nacionalista que habían ido germinando a lo largo de los dos siglos anteriores. La Revolución Francesa sería el momento de arranque de la acepción espiritual y cultural del término nación, al cristalizar los sentimientos nacionalistas gestados durante siglos en Francia, por lo que fue hábilmente utilizado por los jacobinos, y luego por Napoleón, para defender su obra revolucionaria. Sin embargo, la fecha será bien distinta para otras nacionalidades.

<sup>1525</sup> HOBBSMAN, E., 1991, p.24.

totalmente nuevo y distinto. En este sentido Maurizio Fioravanti señala como *para los liberales, la nación ya no es el sujeto del poder constituyente, la nación es una realidad histórico-natural, que no se determina por libre voluntad de los individuos, y que a su vez no determina de manera contractualista los caracteres de las instituciones políticas: la nación, con sus instituciones, es producto de la historia (...) la crítica liberal a la revolución encuentra en el concepto de nación el antídoto necesario contra el contractualismo revolucionario. En la base de las instituciones política ya no está el pueblo, entendida jacobinamente como la universalidad de los ciudadanos vivos (...) sino más bien la nación, que se define esencialmente sobre la base histórica, como sucesión concatenada de generaciones (...) Las instituciones son (...) fruto de la historia y de la experiencia de una cierta nación*<sup>1526</sup>; y por ello no son ilimitadamente modificables. La exaltación de la concepción de nación frente a pueblo, será un paso determinante en la conciencia social de los nuevos estados liberales<sup>1527</sup>, por lo que se habría desarrollado un nuevo modelo de organización política. Sin embargo, la Nación como tal va a ir propiciando el desarrollo de unos valores que le ayude a cohesionar la comunidad política, a dotarla de una identidad propia, insertando en este sentido los ideales que el Romanticismo había iniciado años atrás. Nace la idea de la nación como comunidad de sentimiento que se identifica como un conjunto de miembros que se sienten vinculados a ella, reconociéndose unos con otros como pertenecientes a la misma comunidad, e incluso distinguiéndose de otros que pertenecen a otras Naciones<sup>1528</sup>, por lo que la Nación actuará como elemento de autoidentificación colectiva<sup>1529</sup>. Esta idea del nacionalismo estará construida

<sup>1526</sup> FIORAVANTI, Maurizio *Los Derechos Fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*. Editorial Trotta. 2007, p.107.

<sup>1527</sup> Gellner distingue dos conceptos primordiales que no debemos de tener en cuenta: Nación y Estado, realidades que discurren parejas cuando la sociedad ha alcanzado un cierto grado de diferenciación, por lo que no se plantea como una misma realidad. Según esta tesis, las Naciones y los Estados emergerían de forma independiente y debido a causas divergentes. Así se podría crear Estados sin nación, y Nación sin estado. El concepto de nación, nacerá en la modernidad, y hará hincapié en los aspectos culturales comunes a una colectividad ya que se convertirá en el eje vital donde se instale el conjunto de ideas, signos y representaciones propios de un grupo de individuos, sistema en la que permite que un grupo de individuos se reconozcan como miembros de esta colectividad. Por el contrario, el Estado sería el compuesto del conjunto de instituciones especializadas para la conservación del orden.

<sup>1528</sup> CAMINAL, Miquel *Dimensiones del nacionalismo* en Fernando Quesada, *Ciudad y ciudadanía* Editorial Trotta, p.53.

<sup>1529</sup> En 1861 Stuart Mill en su obra *Del Gobierno representativo* ya enuncia el concepto de nación como una comunidad unida por intereses más allá de lo puramente político: *Puede decirse que las nacionalidades están constituidas por la reunión de hombres atraídos por simpatías comunes que no existen entre ellos y otros hombres (...) El sentimiento de la nacionalidad puede haber sido engendrado por diversas causas: algunas veces es efecto de la identidad de la raza y de origen; frecuentemente contribuyen a hacerla nacer la comunidad de lengua, otras la de religión, etc.* El gran novelista ruso F. Dostoievski en su obra *Los endemoniados* (1871-1872) exclamaría *Si un gran pueblo no cree que la verdad sólo se encuentra en él..., si no cree que únicamente él está dotado y destinado para elevar y salvar a los demás con su verdad, se transformará en seguida en material etnográfico y no será un gran pueblo... Una nación que pierde esta creencia deja de ser nación.*

desde las propias instancias públicas, Hobsbawm apuntaría que el nacionalismo de este momento *no era un desarrollo espontáneo, sino elaborado. No se trataba simplemente de una novedad histórica (...) Tenía que ser realmente construida. De ahí la crucial importancia de las instituciones que podían imponer uniformidad nacional, lo que significaba primeramente el estado, sobre todo la educación pública, los puestos de trabajo público.* Ha surgido por consiguiente la idea de la identidad nacional, que va más allá de lo puramente político o administrativo, sino que se trata de un proceso de vinculación social, de cohesión, que ya aunque tiene su precedentes en etapas anteriores en el Estado-Nación llega a convertirse en un instrumento vital en el orden social<sup>1530</sup>. Habermas señala como la idea de nación *hizo tomar conciencia a los habitantes de un territorio estatal de una nueva forma de pertenencia compartida. Solo la conciencia nacional que cristaliza en la percepción de una procedencia, una lengua y una historia común, solo la conciencia de pertenencia al mismo pueblo, convierte a los súbditos en ciudadanos en una única comunidad política: en miembros que puedan sentirse responsables unos de otros.*<sup>1531</sup>

La identidad nacional se le irá dotando de un bagaje material, un conjunto de bienes que le resaltarán en su pertenencia a un grupo determinado. Miquel Caminal puntualiza que *la historia de la modernidad es la historia de la construcción de un nosotros nacional, de una cultura compartida que ha sobrevivido (...) La educación ha sido un medio esencial de uniformidad nacional, de homogeneidad lingüística, de enseñanza de una historia nacionalista, de implantación y propagación de unos valores y símbolos nacionales.* Y es que al mismo tiempo que se configura el Estado-Nación como nueva realidad jurídica se buscará en el Legado Patrimonial las raíces culturales que fundamentará su existencia como colectivo. Es más, si la Nación ha sustituido al Estado Absolutista como fórmulas jurídico-políticas, y ambos han utilizado en cierta forma el patrimonio

---

<sup>1530</sup> La identidad nacional como valor primordial ya había surgido desde que Herder había publicado en 1774 su *Filosofía de la historia para la educación de la humanidad*, donde se oponía por primera vez al universalismo y al racionalismo iluminista, utilizando por primera vez la palabra cultura en contraposición al término unívoco de civilización. Para Herder la naturaleza humana no era uniforme sino diversificada, y el proceso histórico no era extensivo a toda la humanidad, sino que se circunscribía a pueblos y estirpes particulares. Las ideas del prerromántico Herder serían desarrolladas posteriormente por los románticos del siglo XIX, especialmente entre los románticos alemanes, como fue el caso de Shelling, en su libro *Filosofía y religión* (1804). Después de la I Guerra Mundial surgió una nueva corriente que retomó la oposición a una idea de universalidad y unidad de la historia, teniendo como figura paradigmática a Splenger en su obra *La decadencia de Occidente* (1919-1922), Toynbee con su *Estudio de la Historia*, publicada entre 1934 y 1939. Estos autores considerarían que la historia no tenía una línea única sino que se diversificaba en varias direcciones, con una pluralidad de culturas y civilizaciones. Cabe mencionar la existencia incluso de un particularismo jurídico no ya de cada pueblo sino de cada aldea, cuando el prerromántico Justus Möser defendía que debería ser juzgado de acuerdo a las leyes de su localidad, motivo por el que iniciaría una interesante discusión dialéctica con el propio Voltaire. (cf. SEBRELI, Juan José *El asedio a la modernidad* pp.30-31).

<sup>1531</sup> HABERMAS, Jürgen “¿Tiene futuro el Estado nacional?”, en *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*. Paidós. Barcelona, 1999, p.89.

de raíces históricas para legitimarlo, el Estado Liberal renovará el discurso axiológico, especialmente en el caso de los valores de la Antigüedad, lo histórico o lo artístico ya que serán los que primordialmente definan la nueva mirada que el Patrimonio va a tener, sin olvidar su carácter nacionalista como base interpretativa. Al mismo tiempo que se vaya definiendo el Estado-Nación se irá consolidando el concepto de Patrimonio Histórico-Artístico, y se irá cada vez más precisando que valores deberán ostentar un bien para que simbolice la identidad colectiva de una sociedad. Se buscará el pasado que lo legitime para insertarlo en el presente, como elemento cotidiano, sea una catedral gótica o el palacio de un antiguo soberano, por lo que ayudará a la definición de la identidad nacional propiamente dicho.

Los procesos de destemporalización y descontextualización iniciados en el ámbito revolucionario francés, van a intensificarse en el Estado Nación. Los antiguos inmuebles históricos-artísticos, tanto políticos como religiosos, se convierten en los nuevos símbolos de identidad de la sociedad burguesa conservadora. No pertenecen ya al pasado en exclusiva, forman parte de la comunidad nacional, y al mismo tiempo comienza a ir delimitándose la idea de la existencia de un valor monumental en el seno de los mismos. La sociedad burguesa del Estado Liberal va a romper con el concepto tradicional del tiempo como sentido lineal de concepción cristiana como camino de salvación por la concepción moderna como sentido de progreso humano en su autorrealización en el mundo material. Lo pretérito como elemento configurador de la sociedad, que forme parte de su existencia, será un descubrimiento de las sociedades contemporáneas occidentales, especialmente de las sociedades liberales. Desde la Edad Media la nobleza tendrá una conciencia histórica de linaje, que legitimará la identidad de su pertenencia a una familia concreta dotada de un abolengo que le perfila su poder como clase privilegiada, al mismo tiempo que el alto clero buscará en la historia su legitimidad como estamento de la salvación, que le fundamentará su propio papel de consistencia social. La institución monárquica buscará una conciencia histórica en la legitimidad de su propio poder que encontramos sus raíces en el periodo medieval. Con la llegada de la Ilustración se va ir delimitando una nueva conciencia del pasado al buscar las raíces históricas de lo colectivo. Voltaire en su Filosofía de la Historia ya planteará la nueva concepción del devenir histórico. El nuevo Estado Liberal abrirá una nueva visión de la conciencia del pasado donde la burguesía concebirá una nueva visión temporal de lo histórico, resumida plenamente en la tesis de Gustavo Zagrebelsky *Historia y Constitución: toda la ideología constitucional de la Revolución (...) está contenida en su posición ahistórica o antihistórica (...) La historia relevante es sola la del futuro (...) la verdadera historia de la humanidad es lo que se prefiguraba delante suyo como tarea imperativa, mientras que a su espalda no hay más que el depósito*

*exterminado de ruinas yacentes (...) los revolucionarios, para dar una respuesta a las exigencias de los tiempos, iban a la búsqueda de lo nuevo*<sup>1532</sup>.

No podemos obviar la existencia de una amplia corriente conservadora que va a pervivir posteriormente a los movimientos revolucionarios y van a originar una concepción del pasado de carácter tradicional que van a tener una impronta importante en la conciencia histórica durante todo el siglo XIX. En términos de Gustavo Zagrebelsky: *los revolucionarios, para dar una respuesta a las exigencias de los tiempos, iban a la búsqueda de lo nuevo. Los conservadores, por el contrario, donde no veían simplemente una indiscriminada reacción, buscaban la respuesta en la renovación de lo antiguo. Renovación contra innovación. La visión ahistórica de la conciencia temporal tendría su impronta en la propia concepción del Patrimonio Histórico-Artístico. En los bienes históricos-artísticos que lo configuran se entrecruza el presente y el pasado, por lo que el pretérito no se diluye en el tiempo, sino que permanece en lo cotidiano. En el pasado se descubrirá unas pautas sociales y unos bienes que le llevará a descubrir la existencia de un verdadero patrimonio que habrá que rescatar y conservar para las generaciones venideras*<sup>1533</sup>. Se produce una recepción del pasado integrado en el presente, como parte de la nueva vida surgida desde la revolución. A partir de este momento el bien patrimonial deja de pertenecer a un tiempo histórico determinado, se hace atemporal, es absorbido por la propia comunidad a la que pertenece. En palabras de M. Batjin *las obras de arte rompen los límites de su tiempo, viven durante siglos, es decir, en un gran tiempo, y además con mucha frecuencia tratándose de las grandes obras, esta vida resulta más intensa y plena que en su actualidad (...). Todo aquello que sólo pertenece al presente muere junto a éste*<sup>1534</sup>. Desde este momento el patrimonio se ha convertido en una identidad de la comunidad a la que pertenece configurándose en

La concepción cerrada de una conciencia de la historia limitada a dar legitimidad a un linaje dará como resultado lo que podemos denominar un Patrimonio como Identidad Estamental, que estará formado por aquellos bienes y valores que dan consistencia de pertenencia de grupo. No cabe duda que en el Antiguo Régimen se había definido un concepto patrimonialista de identidad estamental en torno a la aristocracia cortesana y al propio clero, formado por aquellos bienes que delimitaban su legitimidad como clases privilegiadas. Esta concienciación del pasado como identidad de una cultura, sociedad o estamento se dará también en la sociedad liberal. Sin embargo, la conciencia del pasado de la burguesía se extenderá mas allá de sus propios límites como clase social para proyectarla al propio estado surgido de las revoluciones liberales, dando lugar una concepción patrimonial de identidad nacional, por lo que la sociedad liberal irá delimitando un sentido de pertenencia a una sociedad

---

<sup>1532</sup> ZAGREBELSKY, Gustavo *Historia y Constitución*. Mínima Trotta, 2005, p.56 y ss.

<sup>1533</sup> Ballart reafirmaría que *el pasado nos provee de un marco de referencia para que reconozcamos el entorno y*

<sup>1534</sup> BATJIN, M. *Respuesta a la pregunta hecha*

nueva, renovadora frente a la rígida estructura del modelo de la sociedad del Antiguo Régimen, pero que al mismo tiempo buscará sus raíces en etapas anteriores, en una verdadera conciencia de la historia, soportada en un peculiar sentido de patrimonio perdido y rescatado para la nueva era que se abría al hombre libre y civilizado. Estaba generándose una verdadera conciencia cultural de recuperación de los bienes del pasado, estaba definiéndose un patrimonio heredado que había que conservar, estaba en definitiva naciendo la conciencia patrimonial en sentido moderno. Ballart señala como el patrimonio *es una prueba evidente de la existencia de vínculos con el pasado. El patrimonio alimenta siempre en el ser humano una sensación reconfortante de continuidad en el tiempo y de identificación con una determinada tradición (...) En las sociedades modernas los elementos de continuidad y de identificación están presente entre los individuos de la misma forma que en el pasado y son tan necesarios como antes (...) por lo que la noción de patrimonio histórico en el mundo moderno se referirá como aquel legado de la historia que llegamos a poseer porque ha sobrevivido al paso del tiempo y nos llega tiempo para rehacer nuestra relación con el mundo que ya pasó*<sup>1535</sup>.

Se asiste sin duda alguna como fenómeno peculiar la exaltación de los valores de identidad que a modo de testimonio identifica a la peculiaridad de cada comunidad. En este sentido el Patrimonio no es solamente ya los bienes materiales del pasado histórico, sino los hechos o personajes que se quieren recordar como parte de su realidad, por lo que se producirá la eclosión de esculturas o arquitecturas rememorativas que irán definiéndose como monumentos. En la lectura del párrafo de la obra de Nathaniel Hawthorne, titulada Nathaniel Hawthorne, *Musgos de una vieja casa parroquial* se refleja la nueva concepción del Monumento como testimonio del Pasado: Los habitantes más viejos del lugar señalarán los puntos precisos de la margen oeste *en donde cayeron y murieron sus compatriotas; y de este lado del agua fertilizado por sangre británica ha crecido un obelisco de granito. De no más de seis metros de altura, es lo que sentaba bien erigir a los habitantes del pueblo: más ilustración de un asunto de interés local que conmemoración adecuada de una época de la historia de la nación. Con todo, los héroes de la hazaña fueron los padres de este pueblo; y es justo que los descendientes reclamen el privilegio de alzar un monumento*<sup>1536</sup>.

A mediados del siglo XIX se produce una dispersión estética de valores en la concienciación social, no se pudo hablar ya de un estilo unitario que conceptualice todos los ámbitos de la vida. La burguesía dominante busca nuevos valores estéticos especialmente en aquellas raíces históricas que le den legitimidad política, y lo van a encontrar en principio en las corrientes de

<sup>1535</sup> BALLART, Josep, pp.36-37.

<sup>1536</sup> HAWTHORNE Nathaniel, *Musgos de una vieja casa parroquial*, Barcelona, Acantilado, 2009, p.12.



revivals conocido por el historicismo<sup>1537</sup>. Probablemente será en el medievalismo donde la burguesía triunfante encuentre su verdadera ideología estética, especialmente en el proceso constructivo de sus nuevos edificios, a la que se unirá la propia Iglesia Católica<sup>1538</sup>. La lectura de Víctor Hugo es crucial a la hora de entender el contenido de lo medieval en el plano ideológico, como podemos contemplar en la descripción que hará de París en su célebre novela histórica *Notre Dame de París*<sup>1539</sup>. La catedral gótica se convierte en el paradigma de la construcción histórica a conservar, fundamentada en una ideología profundamente burguesa (como en la Edad Media simbolizará el prestigio de la ciudad como marco de su vida), religiosa reflejado en los textos de Chateaubriand en el *Genio del Cristianismo* (18) y a la misma vez. El neomedievalismo como valor estético sin duda ayudó a ampliar el contenido del patrimonio, revalorizando a un amplio número de edificios y objetos muebles que habían rechazados anteriormente por el racionalismo de la Ilustración y los cánones estilísticos del Antiguo Régimen.

### 3.3.2. Los expolios arqueológicos y el despertar nacionalista del Patrimonio Monumental: la experiencia griega

Durante estos años se van a ir incrementando los expolios en el ámbito internacional, promovidos por las distintas campañas propiciadas por los propios Estados, que había comenzado con las campañas napoleónicas en Egipto, al descubrir una civilización ajena a la tradición clásica, que despertaría la curiosidad de eruditos y los expolios de los comerciantes de antigüedades, surgiendo una ola de gusto estético por la egiptología que llenaría todos los círculos intelectuales europeos, a los que se unirían las distintas excavaciones que comenzaría en el área cultural griega y etrusca, que serían promovidos especialmente por los ingleses. La adquisición de los mármoles del Partenón por Lord Elgin, y su venta en 1816 al Museo Británico<sup>1540</sup> y la de los famosos

---

<sup>1537</sup> ARGAN, G.C. *El pasado en el presente. El revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro*. Barcelona, Gustavo Gili, 1977.

<sup>1538</sup> BROOKS, C. *The Gothic Revival*, London, Constable, 1950.

<sup>1539</sup> Se puede observar la descripción de ciudad de París desde dos perspectivas diferentes entre dos escritos separados por sesenta años en el tiempo. En sus *Confesiones* Rousseau en 1732 rechazaría la concepción medieval de la ciudad del Sena: *La primera vez que vi París, ¡qué contraste con la idea que me había formado de ella! Me había imaginado una ciudad bella y grandiosa, de aspecto sublime, en la que sólo se encontrarían calles espectaculares y palacios de oro y de mármol. Pero al entrar por el Faubourg Saint-Marceau, solo vi callejones sucios y fétidos, edificios horribles y negruzcos*. Se estaba refiriendo al enjambre de calles laberíntica propia de una ciudad medieval). Rousseau, Jean Jacques, *Confessions*, Libro IV, 1782, edición de Garnier-Flammarion, Vol.1, París, 1968, p.196.

Víctor Hugo en *Notredame de París* nos daría unos años después una imagen radicalmente distinta, poco tiempo antes de que iba a sufrir una radical transformación:

<sup>1540</sup> Lord Elgin fue nombrado embajador de Constantinopla y aprovechando el buen clima entre su gobierno y el turco saquearía entre 1801 y 1805 la Acrópolis y el Partenón. Una vez adquirido y después de una serie de circunstancias adversas (el naufragio de uno de los barcos que exportaban los mármoles, el apresamiento del propio Elgin por los franceses), negocio la venta de los mármoles con el British Museum, siendo vendido definitivamente en 1816. ST CLAIR, W. *Lord Elgin and the Marbles*, Oxford, 1998; DYSON, Stephen L., *En busca del pasado clásico*, Madrid, 2008, p.

mármoles de Egina, adquirida en 1811 por un equipo de arqueólogos, principalmente ingleses, que terminaría en las manos del rey Luis de Baviera, exhibiéndose en 1828 en la Gliptoteca de Munich<sup>1541</sup>, o la magnífica Venus de Milo adquirida por el Museo del Louvre en 1820, abriría un debate jurídico que iba a prolongar las ya surgidas con el nacimiento años atrás del museo napoleónico.

A pesar de que los mármoles de Egina y los de Elgin, a diferencia de las obras del museo Napoleón, no llegaron a Europa como botín de guerra, se puede apreciar en estas adquisiciones el creciente poder indirecto que los europeos estaban ejerciendo sobre el decadente imperio otomano, por lo que se comenzó a cuestionar si estas prácticas se contraponían a los intereses nacionales, o bien las potencias hegemónicas enarbolando un derecho del bien artístico como bien universal tenían derecho a trasladarlos a unos museos que ajenos al país de origen. Curiosamente podemos apreciar en algunos círculos eruditos como fue el caso de Quatremère había cambiado de opinión sobre el patrimonio artístico. Si en 1815 había defendido el carácter nacional, tres años más tarde, en 1818 declaraba que el gran arte era un bien universal, no nacional. En esta ocasión defendería la tesis de que la conservación de las obras maestras y el acceso del público tenían preferencia sobre el mantenimiento de su emplazamiento original<sup>1542</sup>. Al mismo tiempo la expoliación de Elgin no fue del todo acogida entre sus propios compatriotas, como se puede observar en el caso de las reacciones contrarias de Chateaubriand y de Lord Byron, que consideraba que Elgin no era más que *un expoliador sacrílego que se llevó los miserables restos de una tierra que sangra*.

La independencia de Grecia y el impulso nacionalista daría lugar a una nueva mirada al Patrimonio: los bienes históricos-artísticos que eran genuinos del país formaban parte de su identidad, y por consiguiente tenían que ser conservados por los mismos, convirtiéndose en sus verdaderos propietarios. El recién fundado estado griego promulgaría en 1827 una ley que prohibiría la exportación de antigüedades, por lo que se intentaba poner fin al expolio que había padecido estos años y significaba el triunfo de la primacía de la soberanía nacional sobre los monumentos de un territorio determinado, por lo que se había logrado un primer paso a un reconocimiento de un patrimonio nacional que debía ser respetado por todas las naciones, condenándose los tráfico fraudulentos que se estaban cometiendo, idea que unos años más tarde retomarían los países hispanoamericanos con las antigüedades precolombinas.

### **3.3.3. El ordenamiento jurídico de los Estados Preunitario Italianos como un precedente de una verdadera regulación normativa de carácter público del Patrimonio Histórico-Artístico.**

<sup>1541</sup>

<sup>1542</sup> QUATREMÈRE DE QUINCEY, *Lettres à M. Canova sur les marbres Elgin*, Roma, 1818.

A principios del siglo XIX se va a desarrollar una amplia normativa en los estados preunitarios italianos, especialmente en el Papado y en el reino de Nápoles, especialmente referente al tráfico de obras de arte.

El ordenamiento jurídico de los Estados Preunitario Italianos a principio del siglo XIX	Disposiciones Normativas	Fecha de Publicación
Papado	Editto Cardenal Giuseppe Doria Pamphili, Camarlengo del Papa Pío VII.	1 de octubre de 1802
	Editto del cardinale Camarlengo Pacca sopra la cura degli antichi Monumenti e la protezione delle Arti.	7 de abril de 1820
	Reglamento per la commissione ausiliare di belle arti istituite nelle Legazioni e delegazioni dello Stato Pontificio.	6 de agosto de 1821
Nápoles	Decreto que prescrive il sistema da tenersi nello intraprendimento di scavi per ricerca di oggetti antichi.	14 de mayo de 1822
	Decreto concernente la conservazione degli oggetti e de' monumenti di antichità e belle arti.	16 de septiembre de 1839

### - El Papado: El quirógrafo del Papa Pío VII y el Edicto Pacca.

Al principios del siglo XIX, en el ámbito del derecho italiano se va a ir abriendo un nuevo paso trascendental en el ordenamiento patrimonial histórico-artístico a raíz de la invasión napoleónica, bajo los auspicios del papa Pío VII (1800-1823), al ser privado de gran número de obras de arte, por lo que siguiendo con la tradición papal impulsó una amplia normativa centrada primordialmente en los límites de exportación y circulación ilegal de obras de arte. Carlos Fea (1753-1836) sería nombrado Comisario alle Antichità e agli scavi desde 1800, fue el autor de la ley de tutela del patrimonio artístico de 1802, que actualmente se considera como el instrumento más completo en materia de antigüedades conocida hasta ahora<sup>1543</sup>. Un quirógrafo del Papa Pío VII, del 1 de octubre de 1802, entre los bienes a conservar incluye, además de los antiguos, los de las demás épocas históricas<sup>1544</sup>. Estaría formado por diecisiete artículos que se convierte en una clara declaración de intenciones sobre la tutela pública del Patrimonio Monumental, recogiendo a su vez la

<sup>1543</sup> ROSSI PINELLI, O. Carlos Fea e il Chirografo del 1802: cronaca giudiziaria e non, delle primere battaglia per la tutela delle "Belle Arti", *Ricerche di Storia dell'arte*, 8 1979, p.27-41.

<sup>1544</sup> PIO VII, Quirógrafo sobre la conservación de los monumentos y sobre la producción de bellas artes, 1 de octubre de 1802, incluido en el Edicto de Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, Cardenal Doria Pamphili (EMILIANI, A., Leggi, bandi ...), Bolonia, 1978, pp.110-125; MENOZZI D. *La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri giorni*. Cinisello Balsamo, 1995.

tradición normativa papal. Sería prohibido la extracción de toda obra plástica, *Statua, Bassorilievo, o altro simile lavoro reppresentante di qualunque Statue, Bassorilievo, o altro simile lavoro lavoro rappresentante figure Umane, o di Animali, in Marmo, in Bronzo, in Avorio, ed in qualunque altra materia, ed altresì di Pitture antiche, Grece, o Romane, o segate, o levate dai muri, Mosaici, Vasi detti Etruschi, Vetri, ed altre opere colorite, ed anche di qualunque opera d'intaglio, Vasil antichi, Gemme, e Pietre incise, Camei, Medaglie, Piombi, Bronzi, e generalmente di tutti quelli lavori, o di grande, o di pubbliche, o private, sacre, o profane, niuna eccettuata, ancorlumi ricevono le Arti., e gli Artisti, ed eziandio di qualunque antico Monumento, cloe di Lapidì, o Iscrizioni, Cippi, Urne, Candelabri, Lampadi, Sarcofagi, Olle Cinerarie, ed altre cose antiche di simil genere, e di qualunque materia siano composte, comprese anche le semplici Figuline* (art.1), a la que se uniría toda decoración plástica en las construcciones arquitectónicas: *Questa proibizione vogliamo, che si estenda ancora alle opere asportabili di Architettura, cioè Colonne, Capitelli, Basi, Architravi, Fregi, Cornici intagliate, ed altri ornamenti qualsivogliano di antiche Fabriche, ed anche alle Pietre dure, Plasme, Lapislazuli, Verdi, Rossi, Gialli antichi, Alabastri Orientali, ancorchè grezzi, e non lavorati, Perfidi, Granati, Salvati, Serpentinì, ed altri simili, fuori del semplice Marmo bianco* (art.1.2). El artículo 2 se referiría a las obras pictóricas, por lo que dispondría *quesi estenda anche alle Pitture in Tavola, o in Tela, le quali o siano opere di Autori Classici, che hanno Fiorito dopo il risorgimento delle Arti, o interessino le Arti stresse, le Scuole, la erudizione (...)*. Sería dispuesto una rígida normativa que limitaba el comercio exterior de las obras de arte, incluyéndose una *licenza di estrarre gli oggetti suddetti, assoggettiamo a questa proibizione le persone tutte, di qualunque privilegio fornite, e di qualunque dignita decórate, compresi anche il Rmi Cardinali benché Titolari, Protettori di Chiese, ed altri privilegiatissimi, ancorchè richiedessero per essere compresi specifica, ed individuale menzione, ed ancorché fossero rivestiti di qualsivoglia carattere, quanto piu si possa concepire eminente*(art.3). Al mismo tiempo sería regulada la alteración de las obras plásticas: *Collimando sempre allo stesso oggetto della conservazione delle preziose memorie dell'Antichità. Proibiamo a chiunque di mutilare, spezzare, o in altra guisa alterare, o gustare le Statue, Bassirilievi, Cippi, Lapidì, o altri antichi Monumenti, e molto piu lo squagliare li Metalli antichi figurati, o anche di semplice ornato, le Medaglie di ogni sorte, le iscrizioni in Metalli, e qualuqne alta cosa di simil genere, ancorchè tali Monumenti non fossero che frammen* (art.7). De la misma manera se debía de contar con autorización en caso de alteración de las obras arquitectónicas: *Rinnovando la Costituzione della San. Mem. di Pio II, Cum Almam Nostram Urbem del 1462, proibiamo sotto le stesse pene a chiunque di demolire o in tutto, o in parte qualunque avanzo di antichi Edifici o dentro, o fuori di Roma, ancorche esistenti nei Predi o Urbani, o Rustici, di privata sua, o altrui propieta; riservando a Voi per via di visita dell'Ispettore, e del Commisario la facolta di accordare la licenza per ruinare quelli Ruderì, la conservazione delli quali si conoscesse non essere di alcuna importanza ne per le Arti, ne per la Erudizioni* (art.8).

Los principios contenidos en el Quirógrafo están en la base del Edicto del Cardenal Camarlengo Bartolomé Pacca 1820 (en el pontificado de Pío VII) sobre las antigüedades y las excavaciones, del 7 de abril de 1820 el inventario

de todos los bienes culturales en Roma y en el Estado Pontificio, y su Reglamento del 6 de agosto de 1821, *che si suole vedere il primo ed organico provvedimento legislativo di protezione artistica e storica, che assunse importanza anche fuori dei confini dello Stato pontificio, giacché ad esso si ispirano le iniziative di altri Stati italiani. Risenti infatti della sua influenza il decreto emanato nel regno di Napoli da Ferdinando I di Borbone il 13 de maggio 1822. A parte l'editto del cardinal Pacca ed il decreto borbónico a quello ispirato, dove si interviene anche in materia di conservazione e restauro di beni immobili e si detta anche una prima disciplina degli scavi, in tutta questa legislazione preunitaria il dato comune e di gran lunga prevalente e cos tituito dalla preoccupazione di evitare la fouriuscita degli oggetti di antichità e d'arte e dei prodotti di scavo dai confini dello Stato; primo segno questo di una considerazione della esistenza di un patrimonio artistico e storico da salvaguardare dalla dispersione. E chiaro però che in quei climi político-constituzionali, alla base dell'intervento pubblico mancava una motivazione che si rifacesse ad un concetto di patrimonio artistico-storico nazionale como ricchezza culturale della colettività*<sup>1545</sup>. El Edicto constaría de 61 artículos incluyendo todos los principios primordiales sobre la intervención administrativa del Patrimonio Monumental. Entre las novedades que introduciría el Edicto Pacca cabe señalar el derecho de adquisición al Estado y la imposición en los casos que la exportación fuese autorizada, que el exportador pagase un impuesto del 20 por 100 del valor de los bienes culturales respectivos, al mismo tiempo que instauraría la obligatoriedad de la confección de un inventario de bienes de interés históricos y artísticos y la prohibición de las excavaciones sin una autorización especial<sup>1546</sup>. Dispondría la creación de un aparato administrativo, La Commisione di belle arti (art.1), que estaría compuesta por *Monsignor Uditore del Camerlangato pro tempore, presidente; l'ispettore generale delle belle arti; i'ispettore delle pitture pubbliche in Roma; il comissario delle antichita; il direttore del Museo Vaticano; il primo professore di scoltura dell'academia di S. Lucas; uno dei professori d'architettura della medesima accademia; e l'attuale segretario della Commisione, successivamente al quale desimpegnera stabilmente le di lui attribuzione il segretario generale dei musei* (art.2), disponiéndose un'assoluta giurisdizione, vigilanza e presidenza sopra le antichità sacre e profane, sopra le belle arti, e quei che le professano, sopra gli oggetti delle medesime non solo in Roma, nello Stato ecclesiastico, e sopra le Chiese (art.3), e incluso pudiendovisitare generalmente presso qualunque proprietario e possesore gli oggetti d'antichità, e ritrovandone di singolare e famoso pagio per l'arte o per l'erudizione(art.9).

**- Los límites del tráfico de obras de arte en el Reino de Nápoles: el Decreto de Fernando II de 16 de septiembre de 1839.**

La trascendencia del modelo pontificio va a ser significativa por el hecho de que muchos estados italianos recogerían con ímpetu en sus legislaciones particulares, destacando especialmente la producción normativa

---

<sup>1545</sup> ALIBRANDI; FERRI, pp.4-5.

<sup>1546</sup> SALLEILLES, R. La législation italienne relative a la conservation des monuments et objets d'art, en Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur, Tomo V, ním.1, París (Francia), 1895, pp.1-94.



que se desarrollaría en el reino de Nápoles, bajo los auspicios de Fernando I, iniciado con el **Decreto de 13 de mayo de 1822**, en cuanto a que su artículo II establecía la prohibición general de *demoler o degradar de cualquier modo las antiguas construcciones de edificios públicos*, incluido aquellos situados en fondos privados. Nos encontramos sin duda en un verdadero precedente normativo en el ordenamiento italiano preunitario sobre la intervención de la acción pública del Estado sobre el dominio privado en el ámbito del derecho del Patrimonio Histórico-Artístico. En una misma línea estaría el Decreto promulgado el 16 de septiembre de 1839 por el que las autoridades encargadas de cuidar de los monumentos evitarían a toda costa su degradación y *vigilarán para que no se altere ni se desfigure lo antiguo con las obras modernas, y no ejecutarán restauraciones sin el permiso superior, a obtener por medio del mismo Ministro Secretario de Estado de Asuntos Internos, y tras el examen y dictamen de la Real Academia de Bellas Artes*. Un paso trascendental sin duda lo constituiría el Decreto de 21 de agosto de 1851, promulgado nuevamente por el monarca Ferdinando I, planteando cuestiones que rebasarían la concepción jurídica de su tiempo, al no concebir solamente una tutela de carácter exclusivamente negativa, concretamente en el ámbito de la financiación de las restauraciones de monumentos de interés histórico-artístico. Así, en el artículo I se establecía que Todos los gastos necesarios para la conservación o restauración de los monumentos antiguos o de arte, que se encuentren en los caminos de nuestros Reales Dominios más allá del Faro, correrán a cargo de las provincias, de los Municipios, o de los propietarios privados (...).

El Reino de Nápoles, casi simultáneamente al Edicto Dacca, va a promulgar una serie de normas relacionadas con el ámbito de la restauración inmobiliaria, destacando el **Decreto de Fernando II de 16 de septiembre de 1839, Decreto concernente la conservazione degli oggetti e de' monumenti di antichità e belle arti**, en el que en su artículo II establece que las autoridades encargadas de cuidar de los monumentos evitarán a toda costa su degradación y vigilarán para que no se altere ni se desfigure lo antiguo con las obras modernas, y no ejecutarán restauraciones sin el permiso superior, a obtener por medio del mismo Ministro Secretario del Estado de Asuntos Internos, y tras el examen y dictamen de la Real Academia de Bellas Artes, y con las normas que las mismas habrá de indicar. El mismo monarca, daría una nueva normativa con el Decreto de 21 de agosto de 1851 de carácter muy innovadores como lo podemos comprobar en su artículo 1º: Todos los gastos necesarios para la conservación o restauración de los monumentos antiguos o de arte, que se encuentran en los caminos de nuestros reales Dominios, correrá a cargo de las provincias, los Municipios, o de los propietarios privados. En la legislación del Estado Toscano nos vamos a encontrar también una serie de innovaciones en el ámbito de la restauración inmobiliaria, como es el caso del **Decreto de Vittorio Emanuele del 12 de marzo de 1860** constituye una Comisión para la conservación de objetos de arte, en el que en su artículo 2 se establecía la



competencia de establecer el modo a seguir en el restaurarlos y el de invocar la acción del gobierno para suspender las restauraciones y para acometer aquellas que juzgase necesarias. En el artículo 8º se prohíbe dar inicio a ninguna restauración aquellos que estén inventariados, sin el permiso del gobierno<sup>1547</sup>.

La cuestión de la exportación de bienes de interés histórico-artístico sería objeto de regulación en todos los estados italianos en la etapa anterior a la unión, pudiendo citar la promulgación de edictos y leyes del Gran Ducado de Parma (1760), con extensión al Ducado de Módena (1857), el Véneto (*Divietto di esportazione di opere dello Stato* de 1818), La Lombardía (*Decreto de María Teresa divieto di esportazione di oggetti d'arte* de 1745), Reino de Cerdeña (1832, con la creación de la Institución de la Junta de Antigüedades para la promoción y *ricerca y conservacion de las obras de arte*)<sup>1548</sup>. El 12 de marzo de 1860 se promulgaría en el Estado Toscano el Decreto de Vittorio Emanuele por el que se constituiría una Comisión para la conservación de los objetos de arte y monumentos. En el Veneto y las provincias lombardas se fue desarrollando una amplia legislación sobre el Patrimonio Histórico-Artístico desde finales del siglo XVIII, en la que el Estado iría limitando los derechos de los propietarios privados, especialmente en el ámbito de las Antigüedades Clásicas. La Ley de Excavación del Reino de las Dos Sicilia del 13 y 14 de mayo de 1822, la Ley de Excavaciones de las Provincias Vénetas y Lombardía de 15 de junio de 1846 y la Ley Toscana de 16 de abril de 1846.

#### **3.3.4. La génesis de la institucionalización administrativa del Patrimonio Histórico-Artístico en el derecho francés.**

Los gobiernos liberales que se van a suceder a raíz de la caída de Napoleón van a ir generando una serie de normas que van a constituir el germen de una verdadera tutela pública de los bienes del Patrimonio Monumental<sup>1549</sup>. En un lento proceso se va a ir abriendo camino una cierta concienciación patrimonial sobre un amplio número de bienes muebles e inmuebles, cuyo germen lo encontramos en los albores del proceso

---

<sup>1547</sup> Los datos han sido recogidos de SANCHEZ-MESA MARTINEZ, L., 2004.

<sup>1548</sup> EMILIANI, Andrea, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, 1571-1860*, Bologna, 1978.

<sup>1549</sup> Sería imposible en este trabajo reseñar todo el aparato institucional de la Francia liberal por lo que solamente haré referencia de algunas cuestiones concretas. Cabe mencionar algunos estudios de la rica bibliografía que sobre el tema existe. Los trabajos de Paul León son el germen del estudio de la institución patrimonial monumental en Francia de los que destaco *Les monuments historiques: conservation, restauration*; París, 1917; *La Guerre et l'architecture: la renaissance des ruines: maisons, monuments*, Paris, 1918; *La vie de monuments français*, París, 195. Cabe mencionar a su vez los dos volúmenes del Congrès archeologique de France celebrado en 1934, incluyéndose dentro del catálogo algunos artículos que ayudan a diseñar el aparato institucional francés: VERDIER, Paul *Le service des monuments historiques*, son *histoire, organisation, administration, législation* (1830-1834), pp.53-246. Cabe también mencionar la obra de RUCKERS, Friedrich *Les origines de la conservation des monuments historiques en France (1790-1831)*, París, 1913. Más reciente cabe mencionar COLLETE, Bernard *Les origines du regime actuel des monuments historiques. Les annales du Pays Nivernais*, 26, 1980.

revolucionario. Las primeras respuestas tutelares lo vamos a encontrar desde el ámbito de lo penal, que tendría su raíz en el periodo napoleónico con la promulgación del Código Penal en que su artículo 257, con la rúbrica *Degradacion de los monumentos*, ya establecía un procedimiento sancionador para *todo aquel que haya destruido, derribado, mutilado o degradado monumentos, estatuas u otros objetos destinados a la utilidad pública, o con su autorizacion, serán castigado con pena de prisión de un mes o dos años, y multa de 100 a 500 francos*. Posteriormente, se promulgaría **la ley de 11 de octubre de 1830**, por el que se establecía en su artículo 14 que *en los casos previstos en el artículo 257 del Código penal, si los monumentos, estatuas u otros objetos destruidos, derribados, mutilados o degradados, eran consagrados a la religión del Estado, el culpable será castigado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2000 francos*.

**- El Informe Guizot: Un ensayo de la institucionalización administrativa del Patrimonio Monumental.**

Sin embargo va a ser en el ámbito de la institucionalización administrativa donde el Estado va a encontrar una verdadera respuesta a la tutela jurídica de aquellos bienes históricos-artísticos que considere digno de ser protegidos. Sería durante el gobierno de la Monarquía de Julio, cuando a propuesta del mismo Guizot, Ministro de Instrucción Pública, la redacción de un Informe por el que se nombra la figura de un inspector general de Monumentos, cargo que tendrá una amplia proyección en toda Europa, para el que sería designado el historiador Ludovic Vitet, siendo sustituido posteriormente por Prosper Mérimée<sup>1550</sup>, que lo desempeñaría hasta 1860. Entre las obligaciones que se le irían a atribuir cabe destacar el de recorrer sucesivamente todos los departamentos de Francia, asegurarse en el lugar de la importancia histórica o del mérito artístico de los monumentos, recoger todas las informaciones que tienen relación con los títulos dispersos u objetos accesorios que puedan aclarar el origen, el desarrollo o la destrucción de cada edificio; constatar su existencia en todos los almacenes, archivos, museos, bibliotecas o colecciones particulares; entrar en contacto directo con las autoridades y personas que se ocupan de las investigaciones relativas a la historia de cada localidad; explicar a los propietarios y a los que detentan la propiedad el interés de los edificios cuya conservación esté a su cuidado; y finalmente, estimular y dirigir el celo de todos los consejos de los departamentos y municipios, de manera que ningún edificio de mérito incontestable perezca por desconocimiento o precipitación y sin que las autoridades competentes hayan hecho todos los esfuerzos convenientes para

<sup>1550</sup> Sobre la figura de Prosper Mérimée ha sido objeto de dos grandes exposiciones dedicadas al inspector general del Patrimonio Monumental en la Francia Liberal, JOSSERAND, Pierre; PIERROT, Roger; AUZAS, Pierre Marie, *Exposition organisée pour commémorer le cent cinquantième anniversaire de la naissance de Prosper Mérimée*, París, 1953; COSTA, Georges, *Prosper Mérimée, inspecteur général des Monuments historiques*, París, 1970.

asegurar su preservación, y también de manera que la buena voluntad de las autoridades no se agote en objetos indignos de sus cuidados, así como la de clasificar a los edificios como monumentos históricos, así como designar los créditos estatales para mantener y restaurar de los edificios clasificados<sup>1551</sup>. Al mismo tiempo se abría el camino a la configuración jurídica de la elaboración de la Catalogación, instrumento administrativo que iniciaría el reconocimiento oficial del bien histórico-artístico como bien jurídico: *El inspector general de los monumentos históricos preparará, en su primer viaje de inspección general, un catálogo general y completo de los edificios o monumentos merecedores de una atención seria por parte del gobierno.*

En 1837 se crearía la Comisión des Monuments Historiques, presidida por Vitet, que sería la encargada de declarar si un bien inmueble debía de ser considerado como Monumento Histórico. En el mismo año a la par de la Comisión, Guizot había creado también el Comité des Arts et Monuments, compuestos por arqueólogos e historiadores, sería el encargado de confeccionar el inventario de monumentos. Anteriormente, a raíz de la importancia que había adquiriendo la arqueología medieval, Arcisse de Caumont había fundado en 1834 la Société française d'Archeologie pour la conservation des Monuments historiques, que ayuraría a las tareas de la comisión<sup>1552</sup>. Entre 1840 y 1849 el número de monumentos clasificados se iría incrementando de 934 a 3000, cifra muy significativa si se compara con otros contextos nacionales de este momento. Uno de los ámbitos donde más actuó la recién creada Comisión fue en la restauración arquitectónica, que abrió un amplio debate ideológico entre los propios arquitectos sobre la manera de actuar sobre los edificios históricos en aras a su conservación.

#### **- La tutela pública sobre el Patrimonio Monumental Eclesiástico en la Francia liberal.**

Durante el periodo liberal de los años centrales del siglo XIX va a dar lugar un hecho que va a tener una trascendencia vital en el ámbito de la tutela de los bienes del Patrimonio Monumental: la nacionalización de los bienes eclesiásticos en virtud de las medidas desamortizadoras. Al igual que había ocurrido en el proceso revolucionario francés y posteriormente en la etapa napoleónica, un gran número de bienes que hasta ahora habían sido destinados al culto divino, van a cambiar su identidad al convertirse en bien de interés histórico-artístico, su régimen jurídico al pasar a formar parte de las colecciones estatales, cuyo destino final serían los museos públicos que van a abrirse en este momento, exceptuándose aquellas que habían sido perdidas en un mercado fraudulento. La ola de anticlericalismo que recorre Europa en los

---

<sup>1551</sup> GUIZOT, Informe del Ministro del Interior para instituir el cargo de inspector general de los Monumentos en Francia; en CHOAY, François, p.243.

<sup>1552</sup> LEON P. *La vie des monuments français: destruction restauration*. París, 1951, pp.125-130.

primeros decenios de siglos va a agilizar el proceso. Al mismo tiempo se produce desde el primer momento un proceso de secularización de los trabajos de restauración en el ámbito de los bienes eclesiásticos monumentales que van a convertirse en un verdadero modelo para el resto del ordenamiento europeo. El **decreto de 16 de diciembre de 1848** va a marcar el camino institucional en Francia sobre el ámbito de la restauración de los bienes inmuebles eclesiásticos. En Francia ciertos edificios religiosos, por excepción, sería administrados por el Ministerio de Obras Públicas, pero lo común fue que los bienes inmuebles de interés histórico y artístico, especialmente las grandes catedrales, estarían bajo la dependencia del Bureau des Édifices Diocésains, que a su vez era dependiente del Ministerio de Instrucciones Pública, Cultos y Bellas Artes. Anteriormente a 1848, todos los asuntos correspondientes a la construcción o conservación de las iglesias eran enviados al Conseil des Bâtiments Civils, institución nacida en 1795, como sustitución del Conseil des bâtiments du roi, de tal modo que la administración de Cultos no realizaba ningún tipo de inspección de los edificios. Esta institución tenía a su cargo todas las construcciones públicas, tanto civiles como religiosas, lo que suponía colocar todo tipo de edificios bajo el control de las instituciones académicas. Así obras tan significativas como Saint-Denis, la Sainte-Chapelle o la Catedral de Notre-dame que no cumplían funciones de culto desde la Revolución, al identificarse como monumentos nacionales. Los arquitectos encargados de hacer la labor de los edificios religiosos se realizaba por acuerdo conjunto entre el prefecto departamental y el obispo de la diócesis, siendo nombrado en la mayor parte de los casos el arquitecto departamental. Sin embargo, este sistema se pondría en entredicho a partir de 1848, tendiéndose a una verdadera centralización administrativa, al ser nombrados los arquitectos diocesanos por decreto ministerial entre aquellos que se habían formado en las nuevas inclinaciones estéticas medievalistas. A nivel departamental, el prefecto era el responsable del seguimiento y control de los trámites, al mismo tiempo que nacía la Commission des Arts et Edifices religieux, que sustituiría en estas funciones al Conseil des Bâtiments Civils, que perdería toda competencia en relación con los edificios religiosos. Esta Comisión a raíz del **decreto de 7 de marzo de 1853** sería sustituida por el Comité des Inspecteurs Généraux, que estaría compuesto por tres arquitectos, Viollet-Le-Duc, Vaudoyer y Léonce Reynaud, que serían encargado de supervisar los planos y presupuestos de restauración<sup>1553</sup>.

Ante de creación de la Comisión, los arquitectos actuaban libremente, por lo que en muchas ocasiones tuvieron un resultado desfavorable, lo que llevaría a institucionalizarse la práctica restauradora, especialmente a raíz de la

<sup>1553</sup> Sobre el aparato institucional de la restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico en el periodo liberal francés de la segunda mitad del siglo XIX, LENIAUD, Viollet- Le-Duc et le Service des Edifices Diocésains, París, 1982; *Les architectes diocésains en Les Monuments historiques de la France*, 113, París, 1981, pp.3-9.

restauración de Saint-Denis, que después del sometimiento poco respetuoso que le había dado al inmueble el arquitecto Debret, la Comisión en 1841 a través del Inspector Vitet, denunció el hecho, lo que llevó a dar una respuesta institucional, en la que se comenzó a prescindir de los arquitectos departamentales, que serían sustituidos por arquitectos con formación arqueológica lejos la semblanza clasicista que había caracterizado hasta este momento, dependiendo administrativamente de la autorización del Gobierno<sup>1554</sup>. Un capítulo posterior lo constituiría la convocatoria por parte de la administración francesa en 1842 de la restauración de Notre-Dame de París, un bien inmueble que se habría convertido en el nuevo símbolo ideológico burgués que conjugaba los valores del Estado Nación con los tradicionales cristiano, en una síntesis de lo sacro y secular que iba definiendo el Patrimonio Monumental en el ámbito liberal. El concurso sería ganado por Viollet-Le-Duc, en cuya actuación se abriría una nueva página en la historia de la conservación y restauración de los edificios históricos, no solamente por el propio procedimiento técnico que emplearía, sino por la propia concepción que se le fue dando al patrimonio arquitectónico desde este momento. Aquellos edificios históricos que en principio quedarán en manos de propietarios privados quedaban ajenos a la intervención administrativa.

### **3.3.5. La experiencia liberal en el ámbito del derecho portugués: un ensayo europeo en la configuración del Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Nacional.**

La experiencia de tutela pública que va a experimentar Portugal durante el periodo liberal muestra el ensayo institucional que significó para muchos países europeos durante este periodo la configuración de una verdadera conciencia pública de la existencia de un legado patrimonial que había que defender, por lo que se va ir configurando con la identidad jurídica de Bienes Nacionales. La incautación patrimonial de los ejércitos napoleónicos, la fuga de la corte a Brasil, así como la guerra civil que siguió con la oscilación entre liberales y absolutistas van a provocar una destrucción patrimonial sin precedente. Con las primeras revoluciones liberales en Portugal aparecerán las medidas desamortizadoras que afectaran primordialmente al patrimonio eclesiástico, convirtiéndose en verdaderos bienes nacionales.

Así en virtud de la Ley de 26 de octubre de 1822, en la etapa de la primera revolución liberal del país luso, se va a realizar las medidas desamortizadoras de los bienes eclesiásticos, unidos en este caso a los de la Corona y las órdenes militares. La vuelta al absolutismo monárquico en 1823, y más radicalmente con el reinado de Don Miguel (1828-1834), no limitó las medidas desamortizadoras, ya que la vuelta de los liberales supondría el incremento de las medidas expropiatorias, con los procesos de nacionalización de las leyes del 4 de febrero de 1834, por los que se adquirirían el Patrimonio de

---

<sup>1554</sup> LEON P., 1951, pp.211-215.

la Santa Iglesia Patriarcal y de la Catedral de Lisboa, seguido la del 30 de mayo por lo que se nacionalizaban los bienes de las corporaciones de los religiosos regulares. Unos años después, se continuaría el proceso con las leyes del 4 de abril de 1861, que afectarían a la propiedad de los conventos femeninos y del 22 de junio de 1866, por lo que se nacionalizarían bienes de todo tipo de institución religiosa.<sup>1555</sup>

Las dos décadas que van a seguir a la irrupción del liberalismo a partir de 1832, constituyen un momento crucial en la evolución de las nociones de patrimonio y restauración en Portugal. Desde el punto de vista institucional, los gobiernos liberales se enfrentan con la necesidad de administrar una voluminosa masa de bienes muebles e inmuebles, los que se van a definir a partir de este momento como bienes nacionales, que hasta ahora estaban en manos de las órdenes religiosas. En 1833 se toman medidas con el fin de crear un Museo en Oporto con la herencia de los conventos de la región, a los que les seguirá la autorización para recoger las bibliotecas de los conventos extinguidos en orden a configurar una Biblioteca Pública, en 1834, medida que se irá extendiendo a todo el país entre 1834 y 1835 con la creación de Depositos de Bibliotecas, archivos, pinturas y otras preciosidades literarias y científicas. Al mismo tiempo se van a desarrollar disposiciones dirigidas a la conservación del patrimonio mueble, para lo que se nombra una Comisión encargada elegir, clasificar y dar destino a los bienes histórico-artísticos procedentes de los conventos, medida que va a ser gestionada por la recién creada Academia de Bellas Artes de Lisboa, y más tarde, por la Biblioteca Nacional. Finalmente, se va a decretar la creación en todas las capitales de distrito, de un Gabinete de Rarezas, un Gabinete de Pinturas y una Biblioteca Pública, con el legado de los conventos de la región, para crear una red de instituciones culturales que divulgasen el patrimonio adquirido por el Estado. Al mismo tiempo se va a confeccionar un inventario de los edificios dotados de valor patrimonial, bajo la instancia de Luis Mousinho de Albuquerque, Ministro del Reino, siendo realizado por la Academia de las Ciencias.

En 1840, el propio Mousinho, recién nombrado Inspector General de Obras Públicas, va a clasificar los edificios públicos en tres clases, clasificando la tercera como monumentos, referidos aquellos inmuebles que debían ser conservados y restaurados. A pesar de ello, su proyecto quedaría frustrado por problemas financieros y por las circunstancias políticas y sociales de la época, aunque sí fue un logro el hecho de que la conservación de los monumentos se incluyese aunque raquíticamente en los Presupuestos del Estado en 1840, siendo incluidos solamente tres edificios religiosos en el listado de monumentos históricos dignos de conservar: Batalha, Alcobaça y Mafra, a los que se unió una dotación económica a los Jerónimos. Al mismo tiempo que

<sup>1555</sup> ESPINHA DA SILVEIRA, Luis La desamortización en Portugal en RUEDA, Germán *La desamortización en la Península Ibérica* en Ayer, 9, Madrid, 1993, pp.29-50.



desde las instancias oficiales se había planteado la idea de la existencia de un legado patrimonial que había que defender y conservar, desde el ámbito privado fue surgiendo organizaciones colectivas que ayudaron a la concienciación patrimonial como fueron los casos de la Sociedad Conservadora de los Monumentos Nacionales de 1840, que tenían como fin recoger todas las antigüedades que pudiesen para instalarlos en la iglesia del Carmo de Lisboa como si fuera un Museo, así como la Sociedad Arqueológica Lusitana (1849), que se dedicaría a las excavaciones arqueológicas de las ruinas romanas de Troia<sup>1556</sup>.

A partir de 1852, la tutela pública del Portugal liberal va a ir cambiando bien desde el punto de vista institucional al pasar la responsabilidad del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional a un recién creado Ministerio de Obras Públicas Comercio e Industria, que compartiría con el Ministerio del Reino, más concretamente del Bibliotecario-Mayor, distinguiéndose en la práctica una separación en la intervención estatal al distinguirse entre una conservación práctica, que es la que en definitiva intervenía, bajo la responsabilidad del primero, y una conservación moral, que tenía poca efectividad práctica, auspiciado por el Ministerio del Reino. Sería ya en 1880 cuando se elabora definitivamente el primer inventario oficial del Patrimonio, la *Relatório acerca dos edificios que devem ser classificados monumentos nacionais*, donde se inserta en la misma una amplitud cronológicas de los edificios clasificados como dignos de tutela, que van desde la prehistoria hasta el siglo XVIII, bajo la denominación genérica de monumento nacional, a lo que a su vez engloba como variantes los conceptos de monumentos históricos, monumento artístico y monumento arqueológico (1º, 2º, 3º, 5º y 6º clases), con una inclusión al monumento conmemorativo (4º clase). La consolidación del monumento nacional como figura jurídica ha tenido un recorrido complejo ya que en el decreto promulgado en 1721 para la tutela del Patrimonio, se identificaba con el concepto de monumento, por lo que ya en los inicios del siglo XIX se fue distinguiendo términos como monumento histórico y monumento artístico, a la que se uniría el de monumento arqueológico, a lo que cabe incluir como a partir de 1880 se fue incluyendo la sensibilidad por los conjuntos urbanos como valor patrimonial<sup>1557</sup>. En 1882, a raíz de las acciones de Possidonio da Silva, el Gobierno estableció oficialmente la Comisión Nacional de Monumentos, adscrita al Ministerio de Obras Públicas.

---

<sup>1556</sup> MAIA, Maria Helena De bienes de la Nación a Monumentos Nacionales. Romanticismo y Patrimonio Arquitectónico en Portugal, en *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie VII, Historia del Arte, 2005-2006, n.18-19, pp.112-116.

<sup>1557</sup> MAIA, Maria Helena, 2005-2006, pp.126-132.

### **3.4. La quiebra del derecho absoluto de la propiedad y su proyección en el sistema normativo del Patrimonio Monumental en la crisis del Estado Liberal (1880-1914).**

La irrupción del interés general en el seno de los derechos patrimoniales y la consiguiente debilitación del carácter absoluto del derecho de la propiedad privada provocó un revulsivo sin precedente en el sistema tutelar del Patrimonio Monumental a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, al ir debilitándose la concepción tutelar de los bienes históricos-artísticos que se había fundamentado en función a su régimen de propiedad. Un amplio corpus normativo se fue diseñando en todos los países occidentales, al mismo tiempo que se fue incrementando una intensa acción administrativa que fue debilitando las posiciones doctrinales del individualismo jurídico que habían fundamentado el gozo y disposición de los bienes históricos-artísticos. Este hecho no significaría la superación doctrinal a la hora de construir el Patrimonio Monumental en el seno de los derechos patrimoniales, sino que por el contrario en todos los ordenamientos jurídicos se seguiría

Podemos destacar dos hechos primordiales que se van a dar desde finales siglo XIX en el sistema tutelar del Patrimonio Monumental:

1º) La configuración de una verdadera tutela jurídica del Patrimonio Monumental en la esfera privada, por la que el Estado va respetar el derecho inherente del propietario, pero va a incrementando sus potestades administrativas al ser considerado como un bien jurídico digno de tutela. Así en las distintas normativas promulgadas en Francia como en Italia abrieron definitivamente el camino a la irrupción de un interés general del Patrimonio Monumental que prevalecía el interés general sobre los propios derechos de los particulares, como ocurriría ya definitivamente en la ley de 1913 (Francia) y 1939 (Italia). Al mismo tiempo otros países europeos como Austria y Alemania también promulgarían nuevas normativas donde prevalecía la idea de un interés general, por lo que la acción administrativa iría adquiriendo más potestad sobre el ámbito privado. Sin embargo, no cabe engañarnos, en muchas ocasiones la acción administrativa quedaría diluida por una gran gama de circunstancias ajenas a la propia normativa (las circunstancias belicas, la obstinada defensa del derecho absoluto de la propiedad privada por algunos sectores doctrinales, una administración tutelar poco desarrollada, escasos medios económicos, falta de conciencia patrimonial, etc), que obstaculizaría una verdadera tutela pública. Y a ello habría que unir que no se había delimitado definitivamente la funcionalidad social (cultural) del Patrimonio Monumental, sino que los intereses nacionalistas seguían prevaleciendo como fundamento jurídico en la mayoría de los casos.

2º) La delimitación del Patrimonio como Dominio Público, entendido por éste por bienes de propiedad pública, en el ámbito del Patrimonio Arqueológico. La irrupción de la arqueología institucionalizada por un gran número de países europeos llevaría a un verdadero expolio de bienes arqueológicos, lo que provocaría una reacción defensiva por parte de los territorios afectados, promulgándose una rica normativa sobre el Patrimonio Arqueológico que sería declarado de propiedad nacional, bien en el caso de los países colonizados por las potencias occidentales (Egipto o Túnez), o en los países sudamericanos, especialmente en el caso de México, Perú o Argentina, que habían ido perdiendo un gran número de objetos arqueológicos de las culturas precolombinas que en este momento estaban siendo por la historiografía científica rescatadas del olvido, pero que en la mayoría de las ocasiones terminaban siendo objeto de rapiña del mercado artístico fraudulento. Cabe mencionar que USA articuló un sistema normativo de protección tutelar indigenista en función a delimitar un dominio público sobre su legado patrimonial, en una evolución que va desde la ley de antigüedades de 1906 hasta la de 193.

No cabe duda que la concepción pública de los Estados sobre el Patrimonio Monumental provocaría un derecho internacional de tutela jurídica. En el periodo de entreguerra se gestarían algunos textos internacionales, como la Carta de Atenas de 1931, que representarían la culminación definitiva de la tutela pública del Estado sobre los bienes históricos-artísticos, independientemente de su régimen de propiedad, y su funcionalidad social, verdadero precedente del constitucionalismo cultural en el ámbito contemporáneo.

#### **3.4.1. La quiebra del Patrimonio Monumental como bien inherente al propietario.**

La crisis del Estado Liberal surgida en los últimos decenios del siglo XIX e incrementada en la I guerra Mundial va a suponer una ruptura con el modelo anterior en el ámbito de la tutela jurídica del Patrimonio Monumental tanto en la esfera privada como en la propia intervención del Estado. Sin duda alguna se va a producir el camino definitivo para la configuración del Patrimonio Monumental como auténtico Bien de Interés General, superando las pretensiones nacionalistas que habían definido la etapa anterior. Un hecho trascendental en el ordenamiento jurídico nacido en el seno de la crisis del Estado Liberal como va a ser la concepción de **la propiedad privada como derecho relativo y la incipiente función social de la propiedad en la crisis del Estado Liberal**, superando el espíritu individualista de los códigos civiles decimonónicos, será determinante a la hora de delimitar jurídicamente la configuración pública del Patrimonio Monumental con **la consagración del**

**principio del interés público en el ordenamiento jurídico de la protección histórico-artística y los límites del derecho de la propiedad privada en la crisis del Estado Liberal**, que va a inspirar los diversos sistemas normativos de tutela jurídica del Legado Patrimonial que se van a ir promulgando en un amplio número de países occidentales, que va a significar el triunfo inicial de la llamada **función social del Patrimonio Monumental**, que en los constitucionalismos contemporáneos de los Estados Sociales y Democráticos de Derechos se insertarían definitivamente. Al mismo tiempo que se van produciendo en el ámbito doctrinal (Von Ihering, ) y en el ámbito normativo un requebrajamiento del derecho absoluto del derecho de la propiedad privada se va a ir insertando la conceptualización pública de un Patrimonio Monumental más allá de los intereses puramente nacionalista que se puede apreciar bien de manera doctrinal ( ) como en la amplia producción normativa que se promulga en los primeros decenios del siglo XX (especialmente en el ámbito francés, italiano e hispanoamericana).

Crisis del Estado Liberal	<b>Derecho de la propiedad como fundamento jurídico del Ordenamiento liberal.</b>	<b>La propiedad monumental como fundamento jurídico del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico.</b>
Principios informadores del derecho de la propiedad.	<b>La propiedad privada como derecho relativo y la incipiente función social de la propiedad</b>	<b>La consagración del principio del interés público en el ordenamiento jurídico de la protección histórico-artística y los límites del derecho de la propiedad privada</b>
El derecho de la propiedad en el ámbito de la doctrina	Von Ihering el fin del derecho 1877	Teorías de Riegls Congreso de Arte Público
Sistema normativo	Crisis de la codificación civil decimonónica. Constitucionalismo social (Constitución de México, 1917; Constitución de Weimar, 1919)	Amplia producción normativa en los primeros decenios del siglo XX (

***- La propiedad privada como derecho relativo y la incipiente función social de la propiedad en la crisis del Estado Liberal.***

Desde los años centrales del siglo XIX se va perfilando en el orden político-jurisdiccional un nuevo modelo del derecho de la propiedad, en un momento en que la cuestión social va a ir cuajando en sucesivos conflictos sociales que van ir sucediéndose a los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Pietro Costra señala tres modelos en la cuestión social *La manera de afrontar el conflicto social cebado por el proceso de industrialización es un problema que empeña y divide a la opinión pública decimonónica. Según una primera estrategia, en la defensa intransigente de la libertad y la propiedad (...) el Estado*

*debe permanecer fiel a su papel de mero custodio del orden absteniéndose de turbar el libre juego del mercado. A esta posición (teorizada emblemáticamente por Spencer) se opone una estrategia que continúa viendo en la libertad-propiedad el centro del orden y el crisol de la civilización moderna pero desconfía del automatismo del mercado y piensa que es indispensable la intervención subsidiaria del Estado (...) Una tercera estrategia, estima que resulta imposible una solución satisfactoria de la cuestión social mientras permanezcan intactas las estructuras que vertebran los regímenes existentes, y sostiene la necesidad de una alternativa radical al vigente orden de la libertad y de la propiedad*<sup>1558</sup>. El derecho del trabajo que va a ir delimitándose en esta etapa irá abriendo camino al mismo tiempo a una concepción pública de la intervención del Estado. Martín Bassols apunta como las reivindicaciones agrarias también van a reivindicar las transformaciones del derecho de la propiedad privada.

En el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX va surgiendo en el campo jurídico un movimiento de intelectuales que van a abogar por el reformismo social que denuncian los excesos del derecho inviolable de la propiedad privada y proclaman la reelaboración de dicho concepto. El eje central del pensamiento sobre el derecho de la propiedad estará marcado por una nueva justificación de su funcionalidad, ya que si se había considerado como el más idóneo y productivo de la gestión de los bienes económicos, no puede abandonarse al puro arbitrio del propietario, por lo que la propiedad debe emplearse de forma productiva, y consecuentemente, alcanzar una función social. Rudolf H. Ihering en 1877 en su obra *el fin del derecho* ya alertaría sobre la quiebra del derecho de la propiedad absoluto como derecho absoluto al afirmar que *el principio de intangibilidad del dominio es tanto como entrega de la sociedad a la incompreensión, al capricho y la terquedad, al más frívolo y desaforado egoísmo del individuo*. O. Gierke ya formularía sus objeciones al modelo de propiedad del Código Alemán, al matizar que *la propiedad sin deberes carece de porvenir*<sup>1559</sup>. Jézé en 1909 señalaría admitimos que marchamos hacia un sistema de Derecho en el que la propiedad tendrá por fundamento la obligación del propietario de cumplir una cierta función. Pero no hemos llegado todavía ahí; y la prueba es que ninguna legislación impone todavía al propietario la obligación de cultivar su campo, de conservar su casa, de hacer valer sus capiteles; y sin embargo, esa sería la consecuencia lógicamente necesaria de la noción de la propiedad-función. En la misma línea aparecería otros interesantes textos como el de Hauriou en sus *Principes de Droit public* de 1910 o el mismo Landry en su obra ya clásica *L'utilité sociale de la propriété individuelle*. Con las teorías jurídicas de Dugit se concebiría la idea de una concepción social de la propiedad, que en 1905 en el discurso al Congreso Nacional de la Propriété Batie, y que volvería a defender en su obra las transformaciones del Derecho, llegando a afirmar que la propiedad no es un

---

<sup>1558</sup> COSTRA, Pietro *Derechos en FIORAVANTI, Maurizio El Estado Moderno en Europa. Instituciones y derechos*, Editorial Trotta, Madrid, 2004, pp.58-59.

<sup>1559</sup> GIERKE, O., *La función social del derecho privado*, B. Scaevola, Madrid, 1904, pp.28-29.

derecho; es una función social. La propiedad no le concede a su propietario un derecho subjetivo que puede ejercitar a su exclusiva consecuencia, sino que éste tiene el deber de cumplir una obligación con la colectividad, por lo que si cumple con esta misión sus actos están protegidos, pero si no es así, es legítima la intervención del Estado<sup>1560</sup>. Una muestra de la nueva concepción de la propiedad privada aparecería en los siguientes términos: *El propietario, es decir, el poseedor de una riqueza tiene, por el hecho de poseer esta riqueza, una función social que cumplir; mientras cumple esta misión sus actos de propietario están protegidos. Si no la cumple o la cumple mal, si por ejemplo no cultiva su tierra o deja arruinarse su casa, la intervención de los gobernantes es legítima para obligarle a cumplir su función social de propietario, que consiste en asegurar el empleo de las riquezas que posee conforme a su destino.*

La superación de las ideas liberales del laissez-faire con la intervención del Estado va a romper con la concepción absoluta del derecho de la propiedad privada, al tratar de armonizar la actuación privada con los intereses colectivos. Como afirma J. Miguel Lobato esta política de intervención estatal en las relaciones económicas y sociales, realizadas a través de leyes especiales y mantenida de forma general al término del conflicto bélico a causa de las apremiantes necesidades que imponía la reconstrucción nacional tras los daños ocasionados por la guerra, supondría ya una importante modificación en el espíritu informador del régimen jurídico de la propiedad, logrando su definitiva consolidación tras la Gran Depresión de 1929. *En resumidas cuentas, podría afirmarse, que nuevamente la confluencia de planteamientos éticos, filosóficos,*

<sup>1560</sup> DUGUIT, León *Las transformaciones del Derecho Público y Privado*, Buenos Aires, Heliasta, 1975, pp.214-215. En cuanto a las causas generales de esta desaparición son (...) Primeramente, la propiedad derecho subjetivo es una concepción de orden puramente metafísico, en contradicción radical con el positivismo moderno (...) El sistema civilista de la propiedad se descompone también, porque tiende a proteger únicamente los fines individuales, considerados como suficientes por sí, (...) que encuentra su expresión perfecta en el art.29 de la Declaración de Derechos de 1789 (...) hoy día tenemos la clara conciencia de que el individuo no es un fin, sino un medio; que el individuo no es más que una rueda de la vasta máquina que constituye el cuerpo social; que cada uno de nosotros no tiene razón en el ser en el mundo más por la labor que realiza en la obra social. Así, pues, el sistema individualista está en flagrante contradicción con ese estado de conciencia moderna. Finalmente, el sistema civilista de la propiedad desaparece porque no ha sido establecido más que para proteger la afectación de una cosa a un interés individual, y no puede servir para proteger la afectación de una cosa a un fin colectivo (...) Advertiréis con lo expuesto el fundamento de la nueva concepción de la propiedad. En las sociedades modernas, en las cuales ha llegado a imperar la conciencia clara y profunda de la interdependencia social, así como la libertad es el deber para el individuo de emplear su actividad física, intelectual y moral en el desenvolvimiento de esta interdependencia, así la propiedad es para todo poseedor de una riqueza el deber, la obligación de orden subjetivo, de emplear la riqueza que posee en mantener y aumentar la interdependencia social. Todo individuo tiene la obligación de cumplir en la sociedad una cierta función en razón directa del lugar que en ella ocupa. Ahora bien, el poseedor de la riqueza, por lo mismo que posee la riqueza, puede realizar un cierto trabajo que solo él puede realizar. Solo él puede aumentar la riqueza haciendo valer el capital que posee. Está, pues, obligado socialmente a realizar esta tarea, y no será protegido socialmente más que si la cumple y en la medida en que la cumpla. La propiedad no es, pues, el derecho subjetivo del propietario; es la función social del tenedor de la riqueza (...) La nueva noción de propiedad, la que yo llamo propiedad-afecta, la propiedad sin propietario, sustituye a la antigua noción de propiedad-derecho de un propietario.



*económicos, sociales y jurídicos sientan las bases para la configuración de un nuevo régimen jurídico de la propiedad privada, como ya había ocurrido a finales del siglo XVIII en el que se forjó el llamado concepto individualista del dominio. Y así, relegando en cierto modo la libertad individual ante la justicia social; abandonando el iusnaturalismo racionalista por el positivismo jurídico; remontando los clásicos modelos económicos basados en el laissez-faire en beneficio del modelo keynesiano; en un contexto socioeconómico de ruptura propiciado por la I Guerra Mundial y por los avances tecnológicos, comienza a perfilarse en la cultura jurídica europea un nuevo concepto de propiedad*<sup>1561</sup>.

No obstante, aunque el concepto tradicional de propiedad seguiría perviviendo, podemos encontrar algunas novedades en algunos ordenamientos jurídicos europeos dignas de tenerse en cuenta. Se considera que es en la Constitución de Weimar de 1919, donde se incorpora una cierta dimensión social a la propiedad privada, donde a raíz de la propuesta de Naumann se introduciría un conjunto articulado y diferenciado de derechos<sup>1562</sup>, *superando la objeción de la incompatibilidad recíproca entre los derechos de libertad (negativa) y los derechos sociales; su finalidad declarada era conseguir una democracia capaz de conjugar la tradición occidental, fundada en el respeto de la libertad y de la propiedad (contra el recentísimo modelo bolchevique de 1918, consagrado en la constitución soviética de 1918), prestando atención a las necesidades vitales de los sujetos.* El carácter social de la propiedad privada será una realidad ya en su artículo 151 por el que se establece ya una concepción social de la economía: *la vida económica debe responder a principios de justicia, con la aspiración de asegurar a todos una existencia digna del hombre*, a lo que se añadiría en su artículo 153 que impondría una función social a la propiedad privada y el reconocimiento del derecho de la expropiación por razones de utilidad pública<sup>1563</sup>. El artículo 153, en su apartado 3 proclamaba que *la propiedad obliga. Su utilización debe ser simultáneamente al servicio del bien común*, a lo que se uniría el artículo 155 cuando al referirse a las fincas agrícolas y forestales dispondría que *el poseedor de la tierra está obligado frente a la comunidad a laborar y explotar el suelo*. Esta incipiente formulación social del derecho de la propiedad privada abriría el camino en las posteriores Constituciones europeas elaboradas tras la II Guerra Mundial<sup>1564</sup>. En Francia aunque seguía vigente el artículo 544 del Código

---

<sup>1561</sup> LOBATO GOMEZ, J. Miguel, 1989. p.94.

<sup>1562</sup> Bassols señala como el texto constitucional no se limitó como pretendía su principal redactor H. Preuss, a diseñar una simple estructura organizativa del nuevo Estado (...) la socialdemocracia exigió y consiguió plasmar, aunque con concesiones, todo un nuevo repertorio de valores e instituciones democráticas de marcado signo transformador en el orden económico-social, que constituye el principal ingrediente del constitucionalismo democrático: nacionalización y socialización de empresas, racionalización y planificación de la producción, reconocimiento de la función social de la propiedad y del derecho a la vivienda.

<sup>1563</sup> PEREZ LUÑO, A. 2005, p.50; ANABITARTE, Alfredo Sobre la propiedad:

Observaciones históricas-dogmáticas y actuales. *Revista de Derecho urbanístico y Medio Ambiente*, 225, abril 2006.

<sup>1564</sup> En el ámbito del constitucionalismo económico autoritario de corte fascista, Bassols señala como se va socializando la economía, desarrollándose nuevas relaciones en el ámbito del trabajo, reflejado en la promulgación de la Carta del Trabajo de 1927 o la introducción de

Napoleónico, definida en la concepción absoluta de la propiedad, que al mismo tiempo se había convertido en el fundamento de la libertad individual, se fue resquebrajando progresivamente como fue el caso de imponer límites legislativos específicos que recortaban la prerrogativas del propietario, aunque manteniéndose a salvo la función tradicional del derecho de la propiedad. . Como ya apuntara Pérez Luño sería con la promulgación de la Constitución de Mejiro de 1917 cuando se inicia *el primer intento de conciliar los derechos de libertad con la nueva concepción de los derechos sociales*, que ejercería una amplia influencia en la normativa constitucional de una gran parte de los países iberoamericanos. La función social de la propiedad encontraría un instrumento vital en los ordenamientos liberales: la expropiación propiamente dicha por utilidad pública, que va a abrir un camino primordial en la nueva configuración del derecho de la propiedad en el ámbito occidental. Al mismo tiempo el constitucionalismo de principios del siglo XX irá recogiendo en su articulado la nueva concepción de la función social de la propiedad.

***- La defensa del interés público como principio informador del ordenamiento jurídico del Patrimonio Monumental en el ámbito doctrinal de principios del siglo XX: Las teorías de Riegls.***

Con la impronta del principio de interés público en el ámbito del ordenamiento jurídico se abriría el camino al requebrajamiento definitivo de los límites que la esfera privada había marcado en el ordenamiento jurídico del Patrimonio Monumental, a lo que se aunaba las circunstancias de la existencia de una renovación de los valores patrimoniales en la que hasta este momento lo habían identificado como bien jurídico a proteger, defendida desde los círculos intelectuales que se proyectarían en los sistemas normativos de los primeros decenios del siglo XX que daría una nueva vitalidad en la protección pública del Patrimonio Monumental, no ya solamente como un fundamento puramente estético-nacionalista. La crisis que va a surgir a finales de la I guerra mundial en el seno del Estado Liberal va a provocar vislumbra ya una crisis en el seno de la identidad burguesa no solamente en el ámbito político o social sino en el modo de vida, en sus propias relaciones, no habiendo quedado ajeno la propia identidad cultural europea, que recapacitará sobre sus propias raíces culturales; crisis percibida y testimoniada por un buen número de intelectuales procedentes de muy diferentes campos ideológicos, como se puede apreciar en los textos de Kafka, Proust, Toynbee, Splenger u Ortega y Gasset. Como apunta Victoriano Sainz Gutiérrez en los años 20 de este siglo, por tanto, lo que comienza a aparecer con singular claridad es la vulnerabilidad del orden nacido del pensamiento de la Ilustración en lo ideológico, de la revolución industrial en lo económico y de la Revolución Francesa en lo político

---

1931 de la llamada empresa pública, bajo el impulso del propio Estado. Bassols, M., 1985, p.33.

social<sup>1565</sup>. La crisis cultural vendrá acompañada de un replantamiento de la propia conciencia estética con la irrupción de un amplio número de movimientos que diluyen el estilo oficialista burgués promovido por el Estado. El Realismo abriría una nueva concepción al mundo del patrimonio, daba una lectura social al ámbito artístico, como una contraposición a lo romántico<sup>1566</sup>; el prerrafaelismo, dirigido por el crítico John Ruskin, propondría un concepto místico de la creación artística y abriría el camino en la concepción del patrimonio a una veneración del edificio del pasado en el ámbito de la restauración que influyó ampliamente en la propia identidad del mismo; el Simbolismo, definiría una lectura del arte y el Modernismo de finales de siglo, bajo la dirección de Antonio Gaudí concebiría la relación de la obra de arte con la propia naturaleza. Un segundo grupo de corrientes que irán definiendo la crisis de la modernidad darán el último paso en la mirada del patrimonio, al abrir nuevas perspectivas en la impronta de culturas, sensibilidades, creaciones que hasta este momento no se habían tenido en cuenta en las historias oficialistas. La búsqueda de la luz y el color de los impresionistas<sup>1567</sup>, la crítica social y el retrato de lo espiritual de ámbito laico de los expresionistas o el camino estilístico abierto por el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo o la propia abstracción habían completado el sentido de la contemporaneidad del patrimonio cultural.

La crisis cultural de la identidad europea replanteará la propia concepción del Legado Patrimonial, siendo en los textos de Aloïs Riegls (1858-1905), se percibe una verdadera revalorización de los valores patrimoniales. El erudito austriaco confeccionaría un nuevo corpus valorativo del Legado Patrimonial en su obra *Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung* (*El Culto moderno a los Monumentos. Caracteres y orígenes*), que no era sino la parte introductoria de una obra de más envergadura que con el título *Proyecto de organización legislativa de la conservación* en Austria, a raíz del encargo como conservador general de los Monumentos, de llevar a cabo una reorganización general de la tutela austriaca publicada en 1903. En las reflexiones del erudito austriaco se encierran las nuevas concepciones se van a perfilar en torno a los valores históricos y artísticos, dando una revisión a la concepción esteticista que hasta este momento se le había dado a los bienes a proteger<sup>1568</sup>. La primacía de lo histórico estaba basada en el fundamento evolutivo del bien, en convertirse en un testimonio del pasado que incluso las

---

<sup>1565</sup> SAINZ GUTIERREZ, Victoriano *La cultura urbana de la posmodernidad* Ediciones Alfar, Sevilla, 1999.

<sup>1566</sup> NOCHLIN, L. *El Realismo*, Madrid, Alianza, 1991 (1971).

<sup>1567</sup> REWALD, J. *Historia del Impresionismo*, Barcelona, Seix Barral, 1972 (2 vols) y 1994.

<sup>1568</sup> ARJONES, A. La génesis de los valores de los monumentos, en SCARROCCHIA, S. (ed.) *Actas del Congreso Internacional de la Academia de Brera para el Centenario Rieglano*, Brera, Accademia di Belli Arti di Brera, junio, 2006.

obras de arte podían tener en su propia identidad<sup>1569</sup>. Al considerar la obra de arte en un mero eslabón evolutivo el monumento artístico lo convertía en *un monumento histórico-artístico, cuyo valor no es, desde esta perspectiva, un valor artístico, sino un valor histórico*. Sin embargo, además de ese valor histórico que subyace en todo bien, se percibe en sí mismo un valor *puramente artístico que se mantiene, independientemente de la posición de la obra de arte en la cadena histórica de la evolución*. Nuevamente se cuestiona si este valor es inmutable o por el contrario pertenece al ámbito de lo subjetivo<sup>1570</sup>, encontrando la respuesta en lo que denominaría *la voluntad de arte*, de la que se deduciría lo que denominaría el valor de la contemporaneidad que lo distinguiría del valor rememorativo. Este último sería el que podría considerarse como los verdaderamente monumentales o patrimoniales, es decir los que justifican y propician que un determinado monumento sea protegido, mientras que los de contemporaneidad, son en cambio, valores concurrentes derivados de la presencia y funcionamiento de los monumentos en el presente, los cuales si bien no merecen protección como tales sí requieren consideración por el efecto que desempeñan en el funcionamiento y entendimiento de los monumentos: *Si no existe un valor artístico eterno, sino sólo uno relativo, moderno, el valor artístico de un monumento ya no será un valor rememorativo, sino un valor de contemporaneidad*<sup>1571</sup>. Dentro de los valores rememorativos Riegls distingue a su vez tres valores: el intencionado, el histórico y el valor de antigüedad, por lo que dará lugar a tres tipos diferentes de monumentos. El Valor de la Antigüedad consiste en el reconocimiento y aprecio de los signos impresos por el tiempo sobre el Monumento<sup>1572</sup>; es perceptible por todas las conciencias y no requiere de ninguna experiencia científica, sino que es producto de la simple percepción sensorial<sup>1573</sup>, a diferencia del Valor Histórico, que reside en que representa una etapa determinada, dándole por tanto un carácter documental al Monumento. El Monumento Rememorativo intencionado sería definido como una obra realizada por la mano humana y creada con el fin de mantener hazañas o destinos individuales (o un conjunto de estos) siempre vivos y

<sup>1569</sup> Riegls afirma la supremacía del valor histórico: *El valor histórico es evidentemente el más amplio (...) Llamamos histórico a todo lo que ha existido alguna vez y ya no existe. Según los conceptos más modernos, a esto vinculamos la idea de que lo que alguna vez ha existido no puede volver a existir, y que todo lo que ha existido constituye un eslabón imprescindible e indispensable de una cadena evolutiva (...) El pensamiento evolutivo constituye, pues, el núcleo de toda concepción histórica moderna. Así, según las concepciones modernas, toda actividad humana y todo destino humano del que se nos haya conservado testimonio o noticia tiene derecho, sin excepción alguna, a reclamar para sí un valor histórico.*

<sup>1570</sup> Desde esta posición Riegls distinguiría dos grupos, los que consideraban la existencia de un canon artístico inviolable, que se consideraba desde la época del Renacimiento hasta el siglo XIX los ideales de la Antigüedad Clásica.

<sup>1571</sup> RIEGLS, 2007, p.28.

<sup>1572</sup> El valor de la antigüedad aventaja a los demás valores ideales de la obra de arte en que cree que puede aspirar a dirigirse a todos, a ser válido para todos sin excepción.

<sup>1573</sup> *El Valor histórico de un monumento reside en que representa una etapa determinada, en cierto modo individual, en la evolución de algunos de los campos creativos de la Humanidad.* Riegls, p.40.

presentes en la conciencia de las generaciones venideras<sup>1574</sup>. El valor de contemporaneidad fundamente la nueva revaloración de los monumentos, al considerarse independiente a su pertenencia a su pasado: *La mayoría de los monumentos posee la capacidad de satisfacer aquellas necesidades materiales o espirituales de los hombres que las nuevas creaciones modernas podrían satisfacer de manera similar, y el valor de la contemporaneidad de un monumento se basa en esa capacidad, para lo que evidentemente resulta irrelevante tanto el que haya surgido en el pasado*<sup>1575</sup>.

Una aportación fundamental en la configuración científica del Monumento Histórico-Artístico lo representaría las teorías de Gustavo Giovannoni (1873-1947), figura clave en la teoría de la restauración en la primera mitad del siglo XX. Es muy conocida la distinción que planteó entre los monumentos muertos y los monumentos vivos, recogido en su ensayo *Restauri dei monumento* de 1912, que tendría posteriormente una clara proyección en la normativa del patrimonio en los primeros decenios del siglo. Los monumentos muertos eran aquellos que subsisten como reliquias del pasado y como recuerdos que pertenecieron a civilizaciones ya acabadas, por lo que no pueden tener un destino posterior, bien por su estado de conservación o porque no pueden ser adaptados a otra función. En cambio, los monumentos vivos son los que todavía pueden mantener un destino afín al que fueron contruidos<sup>1576</sup>. Al mismo tiempo abriría un nuevo campo de actuación en la protección patrimonial al considerar que el entorno de los bienes inmuebles debía ser respetado como parte de su propia identidad, es lo que denominaría el ambiente, que había sido recogido en la Ley italiana de 1909 sobre Antigüedades y Bellas Artes, que no solamente impedían la construcción de nuevas edificaciones sino incluso la alteración del ámbito urbanístico a respetar<sup>1577</sup>. Las ideas de Giovannoni serían recogidas por los asistentes del Congreso de Atenas de 1931, la Carta de Atenas, que tuvo una amplia repercusión en Italia con la Carta del Restauro 1932, emitida por el Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes.

La quiebra tradicional del llamado valor monumental sustentando en la lectura esteticista-nacionalista de los bienes históricos-artísticos que se va a producir con la irrupción de las llamadas vanguardias artísticas y los

---

<sup>1574</sup> Frente al valor de Antigüedad, que valora el pasado exclusivamente por sí mismo, el valor histórico ya había mostrado la tendencia a entresacar del pasado un momento de la historia evolutiva y presentarlo ante nuestra vista con tanta claridad como si perteneciera al presente. El valor conmemorativo intencionado tiene desde el principio, esto es, desde que se erige el monumento, el firme propósito de, en cierto modo, no permitir que ese momento nunca en el pasado, de que se mantenga siempre presente y vivo en la conciencia de la posteridad, p.67.

<sup>1575</sup> Riegl, p.71.

<sup>1576</sup> Las teorías de Giovannoni están recogidas en *Restauri dei Monumenti in Questioni di architettura nella storia e nella vita*, Società editrice d'Arte Illustrata, Roma, 1925.

<sup>1577</sup> Giovannoni define el ambientismo como la correlazione cioè tra un'opera e quelle che la circondano, dell'armonia artistica tra manifestazioni collettive e manifestazioni singolari GIOVANNONI, Gustavo, 1912, p.172.

planteamientos de algunos teóricos como Riegls va a provocar en el ámbito jurídico una verdadera quiebra de la concepción tradicional de la titularidad jurídica del Patrimonio Monumental, al ir considerándose un bien jurídico digno de ser protegido por el Estado. No cabe duda que desde el ámbito doctrinal una serie de teóricos del arte, eruditos e incluso artistas vanguardistas van a ir preparando el camino hacia su inserción en el orden jurídico. Aunque como hemos tenido la oportunidad de citar en páginas anteriores ya en algunos artistas románticos como Victor Hugo que había defendido una concepción pública del Legado Patrimonial más allá de cual fuese su poseedor, es en este momento de quiebra del Estado Liberal cuando se produce las primeras voces a favor de la intervención del Estado sobre la esfera privada de los bienes histórico-artísticos.

Reigls en su proyecto para la reorganización administrativa de la tutela de los monumentos en Austria redactado en 1903, ya apostaría por una intervención pública en el Patrimonio Monumental independientemente de quien fuera su propietario. En el prólogo de la edición italiana escrita por el jurista Manlio Frigo se subraya la nueva función que le corresponde al Estado como garante tutelar del Patrimonio Monumental, punto en común de propuesta austriaca con otros proyectos europeos del momento, será haberlo convertido en interés público, al mismo tiempo que se resaltaría en este aspecto la limitación de la tutela sobre la propiedad privada. Reigls apela a un interés egoísta-nacional el fundamento en que se han basado las distintas legislaciones europeas a la hora de limitar a los derechos de los propietarios privados y su tutela sobre el Patrimonio Monumental, entendiendo por ello los intereses particulares sean de carácter económico o político de cada uno de los países o naciones, diluyendo un interés supranacional: *La ley de tutela de Turquía y la de Egipto probablemente han sido creadas a través de consideraciones económicas: si nos damos cuenta del valor material de los monumentos, antes que por el valor ideal (histórico), y, directamente o indirectamente (por medio de la promoción del turismo) se ha tratado de conseguir que este valor material resulte lo más lucrativo para el Estado. En la ley de la protección griega encontramos análogas consideraciones económicas, éstas se revelan siempre a través de fuertes sanciones en el derecho privado (derecho de exportaciones, derecho de expropiación o bien derecho de prevención) se fundan con sentimientos egoístas-nacionales. Del mismo modo cabe interpretar la disposición correspondiente en Italia, donde del resto, según lo dicho anteriormente, el sentido egoístico-nacional evidentemente estaba ya en la base de los reglamentos más antiguos del Papa Pablo III. En cierto modo este mismo sentimiento lo encontramos en la inspiración de la ley francesa de 1837 y aparece en cambio considerablemente en aquella del 1887, en la que se manifiesta ya la influencia de nuevas tendencias altruistas-sociales. La ley húngara atiende mismamente en primer lugar a intereses egoísta-estatales. De acuerdo con todo esto resulta significativo saber que hasta ahora las leyes más rígidas en materia de tutela de los monumentos,*



*las de los países latinos y orientales, tienen como base intereses económicos, egoístas-nacionales o egoístas-estatales*<sup>1578</sup>.

Al mismo tiempo el crítico de arte Riegl ponía un acento crítico de la situación austriaca de la acción tutelar limitado del Estado sobre el derecho de la propiedad privada: *En Austria por tanto en el siglo XIX, por otra, se fundó sobre el valor histórico primero un interés egoísta-estatal y después un interés egoísta-nacional; pero ni uno ni el otro ha sido tan valorado por nosotros – a diferencia de los países latinos y orientales- como para fundar sobre ellos una verdadera ley para la tutela de los monumentos. Con una autoridad con una función consultiva –Como es la comisión Central Imperial y Real para los Monumentos artísticos e históricos- que se ha limitado a influir sobre los propietarios de monumentos desarrollando información y prescripciones; la decisión sin embargo obedece casi completamente a la buena voluntad de los propietarios. Riegl por el contrario defiende un valor sentimental en los Monumentos Históricos-Artísticos adherido a todos los ciudadanos que se convierte en un precedente indiscutible del principio de interés general en la tutela patrimonial, que iría más allá de una consideración económica o política: Solo al inicio de los años noventa se han alzado voces se han alzado voces que han declarado insuficiente la salvaguardia de los monumentos llevada a cabo hasta ahora. El párrafo 9 del proyecto en cuestión define en efecto los monumentos necesitados de protección como dado que su valor artístico e histórico hace de su conservación de interés público. El valor histórico permanece por tanto, como siempre, solo el sustrato de interés verdadero y propio, puede llegar a ser un argumento para la protección. Ahora sin embargo esto no es ya definitivo ni estatal ni nacional-egoístico. Interés público” ciertamente no significa más que “interés de cada uno”, no en su calidad de ciudadano o de pertenecer a un pueblo sino como persona privada. No porque el monumento se convierta en honor y gloria del Estado o bien de una de sus poblaciones, sino para que cada uno llegue a satisfacer sus propias exigencias estéticas subjetivas, debe ser protegido del riesgo de perder la capacidad de tal función. En este punto se explica el que el “valor artístico e histórico” ha dejado de ser un valor intelectual limitado a la clase social de los estudiosos y de sus partidarios entre las personas cultas y éste por convertirse en un valor sentimental para cada ciudadano. Este valor sentimental sin embargo no es otro que el valor de lo antiguo que, justo en este recorrido antes mencionado –es decir hasta la mitad de los años noventa del siglo pasado- ha comenzado a crecer libremente y a superar el valor histórico como un fruto maduro (...).*

En una misma línea nos encontraríamos con las tesis de G. Badlwin Brown en su obra *The care of The Monuments*, al referirse a la ley que había sido promulgada en Inglaterra en 1882: *En el año 1882 se promulga la llamada Ley de Monumentos, norma extremadamente sencilla y nada pretenciosa. Originalmente esta ley contenía una disposición según el cual el particular que poseyera un monumento antiguo y deseara destruirlo, estaba obligado legalmente a sacarlo a la venta previa valoración a cargo del Tesoro. El Parlamento Británico rechazó esta limitación de la libertad del propietario y la ley resultante de esta*

---

<sup>1578</sup> RIEGL, Alois *La ley de la tutela de los monumentos* en la edición comentada por Aurora Arjones Fernández, Junta de Andalucía, 2007, pp.86-87.

*enmienda no incluyó ya disposición alguna. No obstante, lo inocuo de aquella disposición, fue contestada en la Cámara de los Comunes como una invasión en el derecho de la propiedad para complacer el gusto por las antigüedades de unos pocos a expensas de la mayoría*<sup>1579</sup>. La defensa del interés general sobre el derecho de la propiedad privada de los bienes históricos-artísticos queda claramente definido en los siguientes términos: *Se debe señalar que este clamor por la invasión de los derechos de la propiedad ha surgido una y otra vez en oposición a medidas introducidas en interés general y que tales medidas, limitando intereses particulares, son en beneficio de la comunidad. Los derechos de los particulares entran en conflicto cada día cuando hay alguna conexión con las obras públicas y el principio según el cual la comunidad puede, sobre las bases adecuadas, interferir en estos derechos está plenamente establecido en cualquier sociedad civilizada. Lo adecuado de las bases de actuación es asunto a considerar y discutir en cada caso (...) Parece bastante obvio, en estas circunstancias, que nuestro objetivo debe ser una actuación a mitad de camino entre el control absoluto del Estado sobre los monumentos y antigüedades (incluso las colecciones privadas) y el sistema de casi total laissez-faire, que es el prevalece a día de hoy entre nosotros. A continuación hace una interesante radiografía del estado de la cuestión en el ámbito europeo, haciendo especialmente referencia al marco institucional de protección monumental que estaba generándose en este momento: Hasta dónde se podría llegar, dado el estado de opinión actual, es lo que debemos considerar. Por tanto, nuestro propósito principal es contribuir a formar una opinión sobre los diferentes aspectos de la cuestión. Arrojaremos algo de luz si ocupamos aquí un pequeño espacio con una nota sobre el esquema general de legislación y administración de monumentos en el continente. En todos los países europeos que presta atención oficial a esta materia y existe un ministerio para la conservación y la adecuada disposición de monumentos en el continente: ministerio para la conservación y la adecuada disposición de los monumentos. El ministro está asesorado por una comisión de expertos y hay, por regla general, un cuerpo de conservadores, inspectores y arquitectos que llevan a efecto al trabajo. En algunos países esto consiste básicamente en la supervisión, conservación y, si fuera necesario, restauración de los edificios públicos a cargo del Estado; en otros países, consiste en el control de las excavaciones y en la salvaguardia y disposición de los bienes muebles e inmuebles. El presupuesto destinado a estas actuaciones, generalmente protestado por escaso, se pone a disposición del ministerio. Sin embargo, señala un hecho que va a repetirse durante toda esta etapa histórica de la intervención administrativa, el conflicto de intereses que se va a generar entre los propietarios privados y la Administración estatal: Las obras no tienen complicaciones cuando se trata de una propiedad del Estado; pero cuando el suelo en excavación o el monumento en cuestión pertenecen a un particular o a una corporación privada se crea un conflicto de intereses.*

En 1911 un bibliotecario londinense, William Weare, escribiría un librito sobre la reforma de la biblioteca pública en el Reino Unido, Public Library Reform, en el que exige al Parlamento Británico que no considere a la

<sup>1579</sup> BADLWIN BROWN, G. *The care of The Monuments*, p.123.

biblioteca pública una institución caritativa financiada por nobles y adinerados, sino que sea incluida en los presupuestos municipales como una institución sostenida con los impuestos de los ciudadanos. Sostenía que la Biblioteca Pública *no es una especie de institución caritativa. Se crea y se mantiene con el dinero de la gente, pagado, directa o indirectamente, en forma de impuestos (...). Hubo un tiempo que legisladores y gentes ricas, quienes sin duda debían tener un mejor conocimiento, pensaron y dijeron: nosotros tenemos nuestras propias bibliotecas privadas; podemos permitirnos participar en una gran dotación para bibliotecas; por lo tanto, permitamos, como acto de caridad, que la pobre gente trabajadora tengan sus propias bibliotecas*<sup>1580</sup>. Ante estas posiciones claramente doctrinales, debemos preguntarnos cuál fue la posición real de la Administración en el ámbito de los derechos patrimoniales sobre la tutela de los bienes históricos-artísticos.

Estas ideas quedaron bien patente en 1912 cuando en el Congreso de Arte Público de Bruselas se proclamó de un modo preciso, la especial naturaleza de las obras de arte, calificándolas de propiedad privada de interés público. De este modo, el libre y absoluto dominio de posesión de la obra artística daba paso a un criterio de socialización de ésta, condicionándolo en beneficio de la colectividad<sup>1581</sup>. En el Informe N° 7 se especificaba el derecho del autor y sus consecuencias en el derecho privado, público e internacional; los derechos del artista sobre sus obras; los derechos del poseedor de una obra de arte y las obligaciones de éste y los derechos del Estado sobre las obras antiguas y de los tiempos presentes. Se especificaba que *la propiedad de la obra de arte es un derecho de naturaleza especial, condicionado por los derechos del autor y por el derecho del Estado*. Los derechos del Estado comprenden: 1º) El derecho de hacer clasificar las obras de arte en los inventarios oficiales, ya sea sobre requisiciones del propietario, o ya sean por requisiciones de oficio; 2º) El derecho de autorizar la venta o traslación de las obras clasificadas en esta forma; 3º) El derecho de impedir la venta o traslación fuera del país y 4º) El derecho de adquirir para las colecciones públicas, ya sea por el precio fijado por el propietario de la obra, que tendrá siempre preferencia, o ya sean por el precio que fijen los expertos en la materia. En el Informe 11º se incluía la Convención Internacional para suprimir la prescripción en materia de robo o venta fraudulenta de las obras de arte que han pertenecido o pertenecen a los Museos o Colecciones públicas. El Congreso emitiría un voto para tratar de abolir en las legislaciones penales la prescripción en materia de delitos relativos a robo, estafa, degradación y destrucción de las obras de arte o archivos.

---

<sup>1580</sup> WEARE, William Public Library Reform, Londres, 1911. FERNANDEZ Y FERNANDEZ-CUESTA, Paz, *Bibliotecas y personas. Hacia un nuevo enfoque en biblioteconomía*, Gijón, Ediciones Tra, 2005, pp.18-19.

<sup>1581</sup> CALAMA RODRIGUEZ, José María; GRACIANI, Amparo *La restauración monumental en España 1901-1920*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000, pp.40-41.

### 3.4.2. La tutela privada del Patrimonio Monumental en Gran Bretaña (1882-1913).

En Gran Bretaña, la tutela de los bienes históricos-artísticos permanece alejados de la Administración Pública, aunque en estos años nacerían dos grandes museos nacionales, el British Museum y la National Gallery, en la que la participación privada fue fundamental a la hora de . Y es que no cabe duda que las sociedades de protección nacida al amparo de la iniciativa privada van a jugar un papel significativo en el ámbito de la protección del Patrimonio Monumental. Las colecciones privadas inglesas de obras de arte pudieron ser admiradas en 1857 gracias a las gestiones que realizó el Príncipe Alberto, al insitar una invitación a los grandes coleccionistas británicos para que participaran aportando cada uno de ellos una obra significativa, para que así pudiera ser conocido por el público inglés. En 1877 William Morris crearía la Society for the Protection of Ancient Building, quien comenzaría a realizar un inventariado sobre bienes inmuebles históricos. Incluso asociaciones religiosas irían a desempeñar un papel conservacionista como la Church Building Society, o algunas asociaciones arqueológicas como el Oxford Architectural Society y Cambridge Camden Society (1839), el Cambridge Antiquarian (1840) o el British Archaeologica Society (1843)<sup>1582</sup>.

El modelo tutelar privado que había caracterizado la protección del Patrimonio Monumental en Gran Bretaña va a cambiar a finales del siglo XIX, cuando Sir John Lubbock, administrador del British Museum, inicia en 1870 una campaña parlamentaria por la tutela y protección de los monumentos antiguos<sup>1583</sup>. Hasta 1882 no va a dar a luz la primera normativa, el *Ancient Monuments Protection Act*<sup>1584</sup>, che provide alla predisposizione di una scheda di tutti i monumento antichi e anticipó la stesura dell Ancient Monuments Act del 1900. Quest'ultimo fue seguido da un rapporto della Royal Commision nel 1908 e successivamente da ulteriori provvedimenti, risalenti al 1910, finché si arrivo ad una grande svolta della legislazione moderna nei confronti dei monumenti antichi con L'Áncient Monuments Consolidation and Amendment Act de 1913<sup>1585</sup>. Tale normativa assicuara la protección del Monumento Antichi en cuatro aspectos primordiales: 1º) El establecimiento de una organización institucional, para lo que fue constituido un Ancient Monuments Board cuya función primordial era la elaboración de una lista de todo los monumentos cuya tutela era de importancia nacional e de aquellos monumentos que, por no essendo importante a livello nazionale, doveddano

<sup>1582</sup> CHOAY, Françoise, p.129.

<sup>1583</sup> CARMAN, John Archeology, Polits and Legislation: The British experience, pp.126-129.

<sup>1584</sup> BOULTING, Nicholas, *The Law's Delay, Conservationist Legislation in the British Isles*, en FAWCETT, Jane (ed.), *he future of the Past: attitudes of conservation 1174-1974*, Thames&Hudson, Londres, 1974; MURRAY, T. *The history, philosophy and sociology of archaeology: The case of the Ancient Monuments Protection Act (1882)*, en V. Pinsky and A. Wylie (ed.), 1990, pp.55-67.

<sup>1585</sup> SAUNDERS, A., *A century of ancient monuments legislation 1882-1892*, *The Antiquaries Jornal*, 63, 1983, pp.11-29.

essere tutelati nell'interesse pubblico. 2º) fornendo consulenza ed assistenza; 3º) Ejercitando un control público, ya que sus miembros tenían la potestad de adquirir los variados monumentos de acuerdo con los propietarios o de aceptarlos en herencia. Fue establecida un particular procedimiento de tutela en base al cual, siempre con el acuerdo de los propietarios, los miembros del consejo o la pertinente autoridad local potevano essere nominati tutori, con la conseguente responsabilità di conservare il monumento con fondi pubblici; 4. Instituyendo una misura preventiva, mediante la introduzione di Preservation Orders. Tali provvedimenti venivano emessi nei confronti di monumenti di importanza nazionale che correano pericolo di distruzione o rimozione o di danno a causa del comportamento negligente e imprudente del proprietario. La principal característica de tal procedura, che sembrava eccessivamente gravosa, consistirá en que il provvedimento cadeva in prescrizione dopo 18 mesi, a meno che non venisse espresso dal Parlamento un Special Act que confermasse tal ordine di protezione. Durante la vigencia de un Preservation Order, el monumento a cuya tal provvedimento se refería no podrá ser demolido ni alterado senza che fosse ottenuta la especial autorización de parte de la autoridad local<sup>1586</sup>. Los oponentes del Acta persistieron que era una clara interferencia a los disfrutes de la propiedad privada que nunca se había intentado antes, y debido a ello, tuvo que ser modificada de manera sustancial. El Derecho, tal como se introdujo y se debatió en el Parlamento posee una cláusula obligatoria parecida, aunque menos drástica que las del Continente. Si un propietario deseaba derribar un monumento antiguo incluido en la lista estaría obligado a ofrecerlo para compra al Estado, siendo el propio Estado el que evaluara su precio. Tal como explico Lubbock el principio del Derecho era que después de la notificación, el propietario del monumento que deseara derribarla debería justificarla. Esta provisión fue imposible de cumplir. En 1881 en cualquier caso, en lugar de modificarla, llevo a la Cámara una resolución pidiendo al Gobierno que se ocupara del asunto oficialmente, y el resultado final fue que en 1882 Chancellor introdujera en la Cámara de los Lores y fue promulgada, de manera que conseguiría la aprobación final. Lord Chancellor al introducir la medida declaro expresamente que la diferencia entre esta y las medidas previas era que aquí no había un poder de obligar a expropiar el monumento histórico.

El proyecto de ley fue introducido en los Comunes en 1873, siendo Presidente Gladstone, siendo leído por segunda vez pero el Gobierno lo rechazo. En 1874, bajo la administración de Disraeli, fue otra vez presentado, pero fue nuevamente rechazado por Bentinck al considerar una medida de expoliación, y fue presentada por una mayoría de 53. En 1875, se consiguió mejor, siendo votada por una mayoría de 22, aunque en el debate, en la persona de Sir William Harcourt, se opuso por la interferencia del derecho de la

---

<sup>1586</sup> MEZZETTI, Luca *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento britannico*, en MEZZETTI, Luca, *I beni Culturali*, Padua, 1995, pp.392-393.



propiedad. el proyecto de Ley fue retraído en el Comité. La ley de protección de Monumentos Antiguos de 1882 que sería introducida por Sir John Lubbock (1834-1913), mencionada en su artículo primero como Decreto de Protección de los Antiguos Monumentos. Se le daba una amplia potestad al propietario del bien a proteger, especificándose quien podía identificarse como tal: 1°. Cualquier persona con derecho, en beneficio propio, por ley o por equidad, a poseer o a recibir rentas o beneficios de cualquier propiedad sobre el cual se construyó el monumento antiguo; 2°. Cualquier persona con derecho a posesión por ley o por su propio beneficio, a arrendar la tierra donde se encuentra un monumento antiguo, siempre que el arrendamiento no haya sido de menos de cuarenta y cinco años (...); 3°. Cualquier persona con derechos, según acuerdo existente o en un futuro, por ley, equidad o en beneficio propio, y durante su vida (...) a recibir las rentas o beneficio de tierra arrendada donde se encuentra un monumento antiguo, sea o no para toda la vida o arrendado por un periodo de tiempo de no menos de sesenta años o un arrendamiento por un determinado número de años de los cuales no hayan transcurrido más de sesenta años o es una propiedad más grande de los mencionados anteriormente y 4°. Cualquier colectivo, persona jurídica, fideicomisario para organizaciones caritativas, representantes de entidades eclesiásticas o públicas con derecho a arrendamientos durante un periodo de tiempo de no menos de sesenta años (sin haber vencido). En el caso de que cualquiera de las personas nombradas anteriormente sea menor de edad, discapacitado mental, mujer casada, su tutor, cuidador o marido, según el caso, será el dueño dentro de los términos de este Acta (art.9), pudiéndose constituirse como Comisario de Obras y guardian de tales monumentos (art.2). Se especificaba que las expresiones mantener y mantenimiento incluyen el vallado, reparación, limpieza, protección o cualquier acción que pueda necesitar para proteger el mismo de deterioro o daño. El coste del mantenimiento, será sujeto a la aprobación de Su Majestad y financiado por el Parlamento (art.2). Los Comisarios de la Tesorería podrían nombrar uno o más inspectores de monumentos antiguos, cuyos deberes incluirán informar a los Comisarios sobre el estado de dichos monumentos y sobre la mejor forma de conservarlos y se les renumerarán los gastos originales del dinero proporcionado por el Parlamento, previamente determinado por los Comisarios de la Tesorería de Su Majestad (art.5). Se incluía incluso una normativa penal por lo que si cualquier persona dañara o perjudicaba cualquier monumento antiguo referidos en este Acta, dicha persona sería sujeta, según criterio de los jueces que le juzguen, y se le aplicará una de las siguientes penas: Entregar una suma, de no más de cinco libras, y además pagar la cantidad que los jueces estimen oportunos para reparar el daño causado por el culpable o ser encarcelado con o sin trabajo forzado durante un periodo de tiempo que no exceda un mes. Por el contrario, el dueño de un monumento antiguo no estaría sujeto a sanción por cualquier acción que hiciera a dicho monumento, excepto en los casos que los Comisarios de Obras hayan sido nombrados guardianes de tales monumentos, y en este caso, se estimaba que el



dueño había renunciado a sus derechos en cuanto a daños o perjuicios causados al monumento y sería tratado como si no fuese declarado monumento (art.6). Ocasionalmente el Rey por decreto podía declarar que un bien podía ser monumento, considerándose como tal según se refería a la presente Acta (art.10).

En 1904 sería promulgada **The Ancient Monuments Preservation Act** *Considerando que es preciso prever la conservación de los Monumentos Antiguos, para el ejercicio de control sobre el tráfico de antigüedades y las excavaciones en ciertos lugares, y para la protección y adquisición en algunos casos, de los monumentos antiguos y de objetos de interés arqueológico, histórico y artístico.* Al especificar los términos que iban a ser utilizados en la ley definía al Monumento antiguo” como cualquier estructura, montaje, o cualquier túmulo o lugar de enterramiento, o cualquier cueva, una roca, escultura, inscripción o monolito, que sea de interés histórico, arqueológico o artístico, incluyendo a) El lugar de un monumento antiguo; b) La porción del terreno adyacente al sitio del antiguo monumento que pueda ser requerido para preservar el propio monumento y c) Los medios de acceso para la inspección de un monumento antiguo, distinguiéndose del de “Antigüedades”, incluye todos los objetos muebles que el Gobierno Central, por razón de sus asociaciones, históricos o arqueológicos, estima que sea necesario proteger contra las lesiones, dispersión o eliminación. El “Comisionado” incluye a cualquier funcionario autorizado por el Gobierno Central para llevar a cabo el mandato de esta Ley. “Mantener” y “mantenimiento”, incluye (...) la reparación, restauración y limpieza de un monumento protegido, y la realización de cualquier acto que pueda ser necesaria con el objeto de tener el edificio protegido, o de asegurar su acceso.

### **3.4.3. La definición jurídica del Monumento Histórico-Artístico Nacional en el derecho francés en la crisis del Estado Liberal.**

En Francia desde finales del siglo XIX a los primeros decenios del siglo XX, con la crisis del Estado Liberal se va a abrir un nuevo escenario en la tutela jurídica de los bienes históricos-artísticos al ir introduciéndose el principio del interés general en el sistema normativo<sup>1587</sup> al ir delimitándose al Patrimonio Monumental como Dominio Público, la *dominialité publique*: *Les biens culturels du domaine public sont d'abord soumis aux règles de la dominialité publique et donc protégés contre des démembrements abusifs, au même titre que les autres meubles et immeubles.* La Ley de 1887 y la posterior Ley de 1913 presentarían una novedad en el ámbito del derecho comparado, tanto en la concepción patrimonial en relación a la selección y valoración traducida en el régimen jurídico de los Bienes Muebles e Inmuebles como en la propia

---

<sup>1587</sup> BOBBIO, Luigi; LAGACHE, Sergie y PATIN, Valéry: La política dei beni culturali in Francia, en BOBBIO, Luigi (Ed.), La política dei beni culturali in Europa, Il Mulino, Bolonia, 1992, pp.71-75.

naturaleza jurídica, por lo que se irían delimitando el llamado Monumento Nacional. Al mismo tiempo la promulgación de la Ley de 1905 de separación de la Iglesia y el Estado marcaría un nuevo camino en la tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico, especialmente al patrimonio catedralicio, distinguiendo un doble uso en el bien inmueble a clasificar: su uso de culto y su interés histórico y artístico, este último quedando en poder del Estado. En 1895 el publicista francés Gustave Larroumet publica un ensayo que llevaría por título *L'art et l'état en France*, donde aparece un informe sobre la acción del Estado en el campo del arte, reflejo de su experiencia como Ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes, y posteriormente como Director de Bellas Artes, en la que defiende no solamente el papel del Estado como impulsor de la protección del patrimonio cultural sino como acrecentador del mismo mediante la adquisición de obras de arte, el control administrativo de la estética<sup>1588</sup>

---

<sup>1588</sup> Gustave Larroumet *L'art et l'état en France*, Hachette, París, 1895. Marie-Claude Genet-Delacroix *Art et Etat sous la III République. Le système des Beaux-Arts 1870-1940*. Soborne, París, 1992. GARCIA FERNANDEZ, Javier La protección juridical del Patrimonio Cultural. Nuevas cuestiones y nuevos sujetos a los diez años de la ley del Patrimonio Histórico Español, *Boletín de la Facultad de Derecho*, 8-9, 1995, pp.369-370.

<b>Sistema Normativo del Patrimonio Monumental en Francia (Crisis del Estado Liberal)</b>	<b>Principios informadores del derecho del Patrimonio Monumental en el seno de los derechos patrimoniales.</b>	<b>Instrumentos jurídicos de tutela publica.</b>
La ley de 30 de marzo 1887	Sigue prevaleciendo el derecho de la propiedad privada sobre el interés general.	Protección de los bienes historicos-artísticos clasificados de interes publico. Los bienes de dominio privado en funcion a la autorización del propietario.
Orden Ministerial de 16 de febrero de 1892 por el que la Administración se reserva la propiedad sobre los bienes que se descubran en las excavaciones en terrenos procedentes del Estado		
Ley de 9 de diciembre de 1905 de separación de la Iglesia y el Estado		
Ley de 9 de diciembre de 1906	Se resquebraja el derecho de la propiedad privada.	Limites en la exportación de bienes muebles
Decreto de 12 de abril de 1907 relativo a la reunión du Service De Conservation Des Edificies Cultues A Celui Des Monuments Historiques Et a la Nomination Et Aux Atributtons Du Personel DE Ce service		
Ley de 26 de abril de 1907 sobre la conservación de Monumentos Históricos		
Ley de 30 de abril de 1908 por el que se nombran a los inspectores Generales de Monumentos Históricos		
Ley de 16 de febrero de 1912 por el que el Ministerio de Instrucción Pública pueda acometer por motivo de urgencia cualquier medida de conservación a los bienes clasificados		
Ley de 31 de diciembre de 1913	Se implanta el principio de interés general sobre el derecho de la propiedad privada	
Decreto de 18 de marzo de 1924 modificando el Reglamento		

*- Un precedente de intervención administrativa: La Ley de 30 de marzo de 1887.*

La Ley de 30 de marzo 1887, y su reglamento de 3 de janvier de 1889, permitió la clasificación de los monumentos que presentara un interés nacional por el Ministerio de Instrucción Pública, des immeubles, par nature ou par destination, des collectivités publiques; la clasificación en el caso de los propietarios privados estaba subordinada a su consentimiento, por lo que únicamente las obras de interés nacional podían ser protegidas; la protección de los inmuebles de protección de propiedad privada solo era posible en virtud del consentimiento del propietario, limitándose la protección de los objetos muebles a los de titularidad de las personas jurídica pública. En el artículo 1 se especificaba que podían ser clasificados aquellos bienes inmuebles que por naturaleza o por destino y cuya conservación pueden tener interés para la historia o el arte, un interés nacional, serían clasificados, en totalidad o en parte, por el Ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Los bienes inmuebles pertenecientes al Estado serán clasificados por decreto del Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, de acuerdo con sus atribuciones. En caso contrario, la clasificación será efectuada por un decreto en la forma de reglamento de la administración pública (art.2). Los inmuebles pertenecientes a un departamento, a un ayuntamiento, a una fábrica o a otro establecimiento público, será clasificado por orden del Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, si hay consentimiento del propietario del establecimiento y conformidad del ministro bajo cuya potestad se sitúe el inmueble (art.3). En caso de acuerdo, la clasificación será efectuada por reglamento administrativo. En caso de desacuerdo, la clasificación será pronunciada por un decreto (art.3). Los inmuebles pertenecientes a un particular serán clasificados por decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siempre y cuando haya consentimiento del propietario. El decreto incluirá las condiciones de la clasificación (art.4).

El artículo 5 contiene la importante provisión acerca de la compra obligatoria de la propiedad privada, señala que el Ministro de Instrucción Pública y de Bellas Arte puede de acuerdo con las prescripciones de la ley del 3 de mayo de 1841 (ley de expropiación) llevar a cabo la expropiación de los monumentos incluidos en la lista o de aquellos que puede ser objetos de proposición para la lista pero que sea rechazado por el propietario privado. A veces haría falta para una decisión administrativa considerar si valdría la pena el coste de la expropiación y tendría que ser discutido por el Ministro por la Comisión, y posteriormente el Consejo de Estado. El artículo 7 se preocupa de desclasificar en algunas circunstancias de aquellos monumentos que entraron en la lista. En ella reconoce sobre los bienes muebles la inalienabilidad e imprescritibilidad en caso de afecta a uso público. El

Estado que reivindique un mueble<sup>1589</sup>. Los efectos de la protección estarían regulados en el artículo 4, por lo que aquel Monumento que hubiera sido incluido no podría ser destruido ni siquiera en parte, ni podría ser objeto de ningún trabajo de restauración, reforma ni modificación de ningún tipo salvo que el Ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes de su consentimiento. La Ley de 1887 no prevendría ninguna sanción penal por su inoservancia<sup>1590</sup>. El procedimiento de la descalificación de un bien inmueble seguiría el mismo el mismo procedimiento que la clasificación (art.6), especificándose que en caso de alineación consentida a un particular de un inmueble clasificado que pertenezca a un departamento, a un municipio, a una fábrica, o a otro establecimiento público, la descalificación solo podrá efectuarse conforme al párrafo 2 del artículo 2 (art.6.3). En el caso de los bienes muebles también se dispondría una clasificación que se haría por el propio Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, aunque puntualizaría que serían solamente los pertenecientes al Estado, los departamentos, los ayuntamientos, las fábricas y otros establecimientos públicos, cuya conservación presentase, desde el punto de vista histórico y artístico, un interés nacional (art.8). Los objetos clasificados que pertenecieran al Estado serían inalienables e imprescriptibles (art.10), concretizando que aquellos pertenecientes a los departamentos, los ayuntamientos, las fábricas y otros establecimientos públicos, no podrán ser restaurados, reparados ni alineados por venta, o cambio, qu'avec la autorización del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.11). En el caso de descalificarla habría de ser decidida por el Ministro de Instrucción Pública (art.9). Los trabajos, de cualquiera que sea, ejecutados en violación de estas disposiciones, darán lugar a una pérdida del Estado, a una acción administrativa contra quienes ordenaron ejecutarla (art.12), incluso la alienación hecha en violación del artículo 11 será nula, y la nulidad será poursuivie por los propietarios vendedores o por el Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes (art.13).

En el ámbito de las excavaciones arqueológicas la ley de 1887 va a contemplar unas importantes novedades. Siempre que a consecuencia de excavaciones de hallazgos en obras públicas o en otras circunstancias se descubran monumentos, ruinas, inscripciones u objetos de interés para la arqueología, historia o arte en terrenos pertenecientes al Estado, o a un departamento o ayuntamiento, a un organismo religioso, el alcalde debe asegurar una protección provisional hacia los objetos e inmediatamente debe de notificar al prefecto del departamento de las medidas que se han tomado. El prefecto hará un informe a la mayor brevedad posible al Ministro de

---

<sup>1589</sup> DE VISSCHER, Charles, La protection des patrimoines artistiques et historiques nationaux, nécessité d'une réglementation internationale, in *Art et archéologie*, recueil de législation comparée et de droit international, Paris, 1930, N.1.

<sup>1590</sup> BRICHET, R. *Le régime des monuments historiques en France*, Paris, 1952.

Instrucción Pública y Bellas Artes quien definirá las medidas definitivas que han de adoptarse. Si el descubrimiento ha tenido lugar en terreno de un particular el Alcalde notificará al Prefecto. Basandose en el Informe del Prefecto y tras escuchar la opinión de la Comisión de Monumentos Históricos, el Ministro de Instrucción Pública puede proceder a la expropiación de dicho terreno en su totalidad o en parte por razón de utilidad pública, de acuerdo con la ley del 3 de mayo de 1841 (art.6). En caso de descubrimientos de monumentos, de ruinas, de inscripciones y de objetos de interés arqueológico, histórico o artístico, el alcalde del municipio deberá avisar la conservación provisional de los objetos descubiertos e informar inmediatamente al prefecto del departamento des mesure qui auron été prises (art.14.1). El prefecto informará, lo antes posible, al Ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes, que tomará una decisión sobre la decisión definitiva a realizar (art.14.2). Si el descubrimiento ocurriera en un terreno de un particular, el alcalde avisa al prefecto. Sobre este informe del prefecto después de avisar a la Comisión de Monumentos Históricos, el Ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes podrá proceder a la expropiación de los terrenos, en todo o en parte, por causa de utilidad pública, siguiendo las formas de la ley de 3 de marzo de 1841 (art.14.3). Una disposición posterior, la **Orden Ministerial del 16 de febrero de 1892** por el que la Administración se reserva la propiedad sobre los bienes que se descubran en las excavaciones en terrenos procedentes del Estado, otorgándose una indemnización a los que perteneciesen a los particulares (art.25), y a los que perteneciera a la administración (art.33).

*- La Ley de 1905 de separación de Iglesia y Estado y el destino de los bienes del Patrimonio Monumental Eclesiástico.*

Aunque no es lugar en este trabajo de analizar de manera exhaustiva lo que significó la promulgación de la Ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado, en términos generales cabe subrayar la impronta que supuso en el devenir de la cultura occidental, al configurar un modelo de estado laico que bebía en sus raíces de la etapa revolucionaria y posteriormente napoleónica<sup>1591</sup>. En su artículo preliminar se promulgaría la libertad de conciencia como base de esta disposición legal. En el artículo 2º se precisaba que la República no reconocía ninguna subvención a ningún culto, por lo que en consecuencia se suprimía las budgets del Estado, de los departamentos y de los ayuntamientos. Evidentemente la publicación de la Ley abriría una nueva etapa en la tutela pública del Patrimonio Eclesiástico Monumental, Y es que **La Ley de 1905** preveía la clasificación de las iglesias y edificios de culto que presentase un valor artístico o histórico, Uno de los capítulos más

<sup>1591</sup> POULAT, Emile Privatización y Liberalización del culto en Francia. La Ley francesa de 9 de diciembre de 1905, *Anuario de Historia de la Iglesia*, Universidad de Navarra, 2005, pp.69-82.



significativos en el seno de la nueva ley sería el destino de las Catedrales<sup>1592</sup>, que serían confirmadas como pertenecientes al dominio público por la **ley de 17 de abril de 1906 completada por un decreto de 4 de julio de 1912.**

- *La Ley de 21 de abril organizando la protección de sitios y monumentos de carácter artístico y la Ley de 9 de diciembre de 1906: La clasificación de los Monumentos.*

Entre las novedades de la Ley de 21 de abril estaría la constitución de una Comisión de sitios y Monumentos de carácter artístico (Art.1º), estando compuesto por: el Prefecto, presidente; Un Ingeniero de Puentes y Camino et de l'agent voyer en chef; El Jefe del Servicio de Eaux et Forêts; de deux conseillers généraux élus par collègues et de cinq membres choisis par le Conseil general parmi les notabilités des arts, des sciences et de la littérature (Art.1º). Esta Comisión elaboraría una lista de propietarios *fonciers dont la conservation peut avoir, au point de vue artistique on pittoresque, un intérêt général* (art.2º). Los propietarios de los inmuebles designados por la Comisión serían invitados a no destruir ni modificar su identidad, salvo la autorización especial de la Comisión y el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, por lo que en caso de que se diera este compromiso, el inmueble sería clasificado por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. En caso de que el compromiso se rechazara, la Comisión notificaría tal rechazo al departamento y ayuntamiento del territorio donde la propiedad estuviese ubicada. La descalificación podría tener lugar en las mismas formas y las mismas condiciones que la clasificación (3º). El Prefecto, podría expropiar por interés público, todos los bienes inmuebles que hubieran sido clasificados y fueran de interés general (art.4). Toda obra de modificación realizada en los inmuebles de las obras clasificadas por la Comisión por sus propietarios, serían sancionadas con multas que iban de 100 a 3000 francos. Incluso sería aplicado el artículo 463 del Código Penal (art.5). Con la promulgación de la **Ley de 9 de diciembre de 1906**, sería prohibido el transporte fuera de Francia de objetos culturales clasificados, previendo una serie de sanciones penales en relación con los trabajos de restauración, reparación o mantenimiento de inmuebles u objetos muebles clasificados, cuando no hubieran sido autorizados por la administración, o los mismos se hubieran realizado en contra de la autorización otorgada. Se establecía como infracciones, la enajenación irregular o la exportación de objetos de arte, siguiendo la línea establecida por la Ley de 1887<sup>1593</sup>. El **26 de abril de 1907** sería promulgada una nueva **Ley sobre la conservación de monumentos históricos**, en la que se establecía especialmente un personal administrativo dedicado a la clasificación de los

---

<sup>1592</sup> NORMAND, Charles Du destin des cathédrales D'Après Le Projet de Séparation des Eglises et De L'Etat, L'Ami Les Monuments et Des Art, Tomo XVIII, p.334.

<sup>1593</sup> BRICHET, R., 1952, p.50.

bienes: *Le soin de procéder aux recherches que comporte le classement des antiquités, ouvres d'art et autres objets, meubles ou immeubles par destination, visés par la loi du 30 mars 1887, est confié á un personnel technique qui relève du ministre des beaux-arts(art.1) Ce personnel est en outre chargé de veiller a la conservation, par les administrations qui les détiennent, des objets soumis au classement, qu'a leur entretien et a leur réparation.*

**- La Ley de inspectores Generales de Monumentos Históricos de 30 de abril de 1908.**

La disposición se completaría con el **Decreto de 30 de mayo de 1908 por el que se crea el cargo de Inspector General de Monumentos Historicos**, que serían nombrados por decreto (art.1º), encargándose de *l'étude des questions techniques qui intéressent les monuments classés, de la haute surveillance de ces monuments et des travaux dont ils sont l'objet* (art.2), cuyas atribuciones respectivas serían *fixées par décision ministeriale*. Los inspectores generales formarían *un comité consultatif, dont font partie avec eux le chef de la division des services d'architecture, le chef du bureau des monuments historiques et le contrôleur général des travaux d'architecture* (art.3). La **Ley de 19 de julio de 1909** da la posibilidad de clasificar un objeto de propiedad privada con el consentimiento del propietario; la exportación de tales objetos *est interdite*.

**- El triunfo de la intervención administrativa de la tutela pública del Patrimonio Monumental: La Ley de 1913.**

La **Ley de 31 de diciembre de 1913** permitió ajustar la legislación a las nuevas exigencias públicas. Como apunta Victoria Quirosa García, la ley de 1913 es la primera gran ley de protección de patrimonio cultural que ofrece un modelo global de protección (...) <sup>1594</sup>. La democratización de los bienes culturales en el ámbito francés posteriormente tendría su punto de partida precisamente en la Ley de 1913 <sup>1595</sup>. Choay se trata de la instauración de un dispositivo estatal centralizado, dotado de una poderosa infraestructura administrativa y técnica –el Service de Monuments Historiques– y de una red de procedimientos jurídicos adoptados al conjunto de los casos previsibles. La Ley de 1887 el criterio de protección de los bienes históricos-artísticos será el de interés nacional, mientras que en la Ley de 31 de diciembre de 1913 sobre los Monumentos Históricos, se establece su tutela en base a que desde el punto de vista de la historia y del arte presentan un interés público, más cercana ya a las concepciones contemporáneas de la tutela patrimonial <sup>1596</sup>.

<sup>1594</sup> CORNU, M. *La Loi du 31 décembre 1913, matrice en droit interne: a propos des objets mobiliers*.

<sup>1595</sup> MESNARD, André-Hubert “Democratisation de la protection et de la gestión du Patrimoine Culturel Immobilier en France” en *Revue de Droit Public* 1986, pp.746-747.

<sup>1596</sup> BOBBIO, L., LAGACHE, S. y PATIN, V., “La política dei beni culturali in Francia”, en BOBBIO, LUIGI, *Le politiche dei beni culturali in Europa*. Bologna, Il Mulino.

La Ley de 1913 se caracterizaría por dos novedades importantes con respecto a la Ley de 1887: por una parte, se habilitaba por parte del Estado la clasificación de las propiedades pertenecientes a particulares, y por otra se reforzaba la protección derivada de la clasificación. La declaración formal del bien a través de la técnica administrativa de la *classement*, se convierte en el instrumento vital de tutela jurídica por parte de la Administración, diferenciándolo de aquellos bienes que van a ser inscritos en la *liste de monuments protégés*. La clasificación por fin se impondría sobre los particulares, estableciéndose una indemnización en caso que supusiera un perjuicio, por lo que se creaba un procedimiento secundario de inscripción con la creación de un inventario suplementario de monumentos históricos, que quedará definitivamente instaurado, de forma permanente, por la ley del 23 de julio de 1927<sup>1597</sup>. La acción administrativa del Estado iría más frente a las pretensiones del propietario al establecerse en el artículo 1.3 al tener la prerrogativa la Administración de cambiar la clasificación de un bien con su simple notificación al poseedor. Cabe mencionar que el término interés público utilizado en la Ley de 1913 sustituiría al de interés nacional de la Ley de 1887. La expropiación se contempla ya en la Ley de 1913 como un instrumento del propio Estado frente a las pretensiones del propietario privado, al insertar en su artículo 21, la prohibición de los bienes clasificados, dejando libertad aquellos bienes que no gozan de esta condición: *L'exportation hors de France des objets classés est interdite*. No obstante, la Administración puede requerir al propietario o tenedor del bien clasificado para presentarlo ante sus agentes y percatarse así de la fuga del bien, como así consta en el artículo 23.1. De los 4000 objetos muebles clasificados en 1905, se pasarían a 30.000 en 1913. El resto de los bienes no clasificados estaba autorizado, aunque en la posterior Ley de 31 de agosto de 1920 extendería la prohibición de exportación a ciertos objetos no clasificados, dando lugar a un deterioro del mercado de obras de arte, desplazándose de París a Ginebra y Londres, por lo que sería derogada por la Ley de finanzas de 1922<sup>1598</sup>. Cabe mencionar que la Ley de 31 de diciembre de 1913 incluiría algunas nociones claves en el llamado patrimonio urbano como fue la noción del campo de visibilidad de un inmueble histórico en un perímetro de 500 metros por lo que se abriría el camino sobre la gestión pública en torno al concepto del casco histórico<sup>1599</sup>. Como derivación de la Ley de 1913 de Francia se promulgaría la **Loi relative a la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique de Quebec de 21 de marzo de 1922**.

---

<sup>1597</sup> MESNARD, Andre-Husberd, *L'Action Culturelle des pouvoirs publics*, París, 1969, pp.127-128.

<sup>1598</sup> EYGOUT, Henri "La protection des objets mobiliers d'art et d'histoire", Ed. Marcel Giard, París (Francia), 1922.

<sup>1599</sup> BELLESCIZE, Diane de "De l'ancienne à la nouvelle législation sur la protection du patrimoine architectural et des sites: Les Zones du Patrimoine Architectural et Urbain" *Revue de Droit Public* 1986, pp.775-782.

A raíz de la promulgación de la **Ley de 31 de diciembre de 1921**, cualquier bien mueble que presentase un interés sensible desde el punto de vista histórico, artístico o científico podía ser clasificado y gozar de la protección que ello conllevaba. No obstante, en el camino de la intervención del Estado se daría un paso más, al tener presente a aquellos bienes que no habían sido inventariados, como aparecería regulado en el artículo 33: *Se establecerá una relación de los bienes muebles de propiedad privada existentes en Francia a la promulgación de la presente Ley y que, conocidos como portadores de un excepcional interés histórico o artístico, podrían por su naturaleza figurar en las colecciones nacionales*. La inscripción en esta lista se le notificaría al propietario al mismo tiempo que asumiría la obligación de notificar al Ministerio de Bellas Artes todo proyecto de enajenación del bien inventariado. Siguiendo el espíritu de la Ley de 1913, se promulga la **ley de 2 de mayo de 1930**, por la que se protegía los conjuntos naturales, emplazamientos de carácter artístico, histórico, científico, legendario o pintoresco (sites), en la que se castigaba *a cualquiera que intencionadamente haya destruido, modificado o degradado un monumento*.

#### **3.4.4. La impronta de la legislación italiana en la configuración jurídica del Patrimonio Histórico a principio del siglo XX (1860-1939).**

Con la unificación del Estado Italiano en 1860 y la creación de un corpus legislativo unitario para la nueva nación, la regulación avanzada que había ido desarrollando los distintos Estados va a dar un paso atrás, al insertarse las ideales a ultranza del liberalismo, por lo que se proclamará la identidad unívoca del derecho de la propiedad privada como eje del ordenamiento.

<b>La impronta de la legislación italiana en la configuración jurídica del Patrimonio Histórico a principio del siglo XX (1860-1939).</b>	<b>Disposiciones Normativas</b>	<b>Fecha de publicación</b>
	Ley n.2359, de expropiación pública por utilidad pública	25 de junio de 1865
	Legge N.1461 che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichità	8 de julio de 1883
	Leggi n.31 provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichità	7 de febrero de 1892
	Ley N° 185, sobre la conservación de los Monumentos y Objetos Arqueológicos y Artísticos	27 de junio de 1902
	Legge que modifica la de 12 de junio de 1902. N° 185, para la conservación de los monumentos y de los objetos antiguos y artísticos	27 de junio de 1903
		27 de junio de 1907
	Legge, n.364, per la Antichità e Belle Arti	20 de junio de 1909
	Legge portante modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n.364, per la Antichità e Belle	23 de junio de 1912

	Arti	
	Regio Decreto 33, n.363, que aprueba el reglamento para la ejecución de las leyes 20 de junio de 1909 y 23 de junio de 1912 relativa a las antigüedades y bellas artes	0 de gennaio 1913

**- Codice Albertino de 1865 y la Ley 2539 de 25 de junio de 1865.**

En el Código de 1865 en su artículo 436 se establece que *La proprietà e il diritto di godere e disporre della cose nella maniera più assoluta, purché non se faccia un uso vietato dalla legge e dai regolamenti*, e già una posición avanzada respecto al Statuto Albertino, intessuto di ideología liberal che all'art. 29 recitaba tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili. Comienza a emerger il profilo del interés público che può far comprimere il diritto di proprietà di cui al successivo art. 438. *Nessuno può essere costretto a cederle le sue proprietà non per causa di pubblica utilità legalmente riconosciuta e dichiarata e premesso il pagamento di una giusta indennità*. A pesar de la delimitación absoluta de la propiedad privada, se fueron promulgando una amplia normativa en base a un interés nacional que llevara a intervenir el Estado en aquellos bienes que considerase dignos de protección. Cabe mencionar a la figura del arqueólogo G. Fiorelli, superintendente de las excavaciones de Pompeya, defensor de una serie de principios innovadores a la hora de configurar una configuración pública del Patrimonio, ya que al considerarlo como un instrumento eficaz de conciencia del propio pasado, defendía el hecho de que la propiedad privada de los monumentos históricos y artísticos debía estar subordinada al interés público. Algunas disposiciones normativas como la **Ley 2539 de 25 de junio de 1865** regulando las potestades expropiatorias del Estado sobre los monumentos en ruinas<sup>1600</sup>. Capítulo V De la expropiación de Monumentos Históricos de la Antigüedad Nacional.

Art.83. Ogni Monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile, o la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Province e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità. Art.84. All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli artt.4 e 5, e la speciale notificazione della proposta o domanda al proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicato dell'art.12 sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione. Art.85. Ita a pagarsi e stabilita amichevolmente, o nel modo indicato dagli art.31 e seguenti della presente legge. La Ley 31/1882 introduciría la sanción penal por la *sottrazione, la distruzione, la supresión y el danneggiamento di oggetti compresi in collezionison* claros ejemplos de ello. En

<sup>1600</sup> ALLIBRANDI Y FERRI, *I Beni Culturali e Ambientale*, Giuffrè Editore., 1985.

estas fechas se ha institucionalizado el cargo de Inspector General para la Pintura y Escultura de Italia, siendo nombrado para el cargo en 1875 Battista Cavalcaselle, a la vez que Inspector de Museo Nacional de Florencia<sup>1601</sup>.

**- La Ley 12 de junio de 1902 y el Reglamento de 17 de julio de 1904.**

Allibrandi y Ferri señalan que la **Ley 12 de junio de 1902, n° 185**, conocida como Legge Nasi, por el nombre del Ministro de Instrucción Pública que la aprobó, y el **Reglamento de 17 de julio de 1904, n° 431**, se pueden considerar como el primer acto de legislación orgánica sobre la materia, aunque en el caso de la exportación, que resultaría prohibida solo para aquellos objetos artísticos que habrían sido previamente inscrito en un catálogo, cuya realización se propondría en la propia ley. No obstante, Mattaliano apunta como esta ley inicia un nuevo proceso por el cual se va a intentar conciliar los intereses del Estado con los de la propiedad privada<sup>1602</sup>. Como apunta Cortes *tuttavia ebbe il pregio di costituire un grosso ostacolo al principio della libera circolazione dei beni, in quanto istituiva uno strumento per schedare i beni e poterne quindi facilitare il controllo: il catalogo dei beni culturali, proibendo al contempo l'esportazione dei beni che trovassero menzione nel catalogo, purché fossero di grande presagio e istituendo, per le altre esportazioni, il pagamento di una tassa progressiva, in relazione al valore dell'oggetto da esportare, e la facoltà per lo Stato di acquistare il bene*<sup>1603</sup>. En el artículo 1 de la Ley 185/1902 proclama el principio de que *Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agli immobili e agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni*, por lo que *Il principio ribadisce che la normativa non costituisce una nuova categoria di proprietà pubblica né modifica il concetto di proprietà definito dal codice civil*<sup>1604</sup>.

Las disposiciones serían aplicadas a los monumentos, referentes a los inmuebles y a los objetos muebles que sean apreciados como arqueológicos o artísticos, quedando excluidos los edificios y objetos de arte cuyos autores vivan o cuya ejecución no date de más de cincuenta años (art.1). Se establecería la inalienabilidad de las colecciones que se considerasen objetos artísticos o arqueológicos, que no formasen parte de aquellas, cuando las colecciones y objetos pertenecieran al Estado, a los Municipios, a la provincia o cualquiera

<sup>1601</sup> CONTI, A. *storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte*. Ed. Electa, Milán, 1988.

<sup>1602</sup> MATTALIANO, E. *Il movimento legislativo per la tutela delle cose di interesse artistico e storico dal 1861 al 1939, al Ricerca sui beni culturali*. Roma, Camera dei Deputati, 1975, p.18.

<sup>1603</sup> CORTESE Wanda, *I beni culturali e ambientali*, 2002, p.38.

<sup>1604</sup> CORTESE, Wanda, 2002, p.39.



entidad reconocida legalmente, y no estén comprendidos en el primer párrafo del presente artículo (art.1). Uno de los puntos vitales de la nueva ley sería la elaboración del Catálogo de los Monumentos de objetos artísticos y arqueológicos, que estaría dividido en dos partes: una correspondería a los monumentos y objetos artísticos y arqueológicos correspondientes a las personas legales, y la otra a los monumentos y objetos artísticos y arqueológicos de propiedad privada que fueran inscritos en Catálogo por denuncia privada u oficial (art.23), por lo que nuevamente se distinguían en cuanto a regulación en función al régimen patrimonial. En el caso de las personas legales, se indicarían los monumentos y objetos que no podían ser enajenables a los particulares, según las disposiciones del artículo 3º (art.23). Los síndicos, los presidentes de las Diputaciones provinciales, los párrocos, los rectores de las iglesias, y en general, todos los administradores de las personas legales, presentarían al Ministro de Instrucción Pública el Catálogo de monumentos, especificando como tales a los inmuebles, objetos artísticos y arqueológicos, que pertenecieran a las personas legales cuya administración le tuviese confiada (art.23.2). La limitación a la propiedad privada vendría dada en la disposición obligatoria de inscribir de oficio en el Catálogo los bienes de su propiedad cuya exportación constituyera un grave perjuicio para el patrimonio histórico y artístico del país (art.23.3), determinándose a su vez que dentro del mes siguiente de haber inscrito el objeto arqueológico o artístico de propiedad privada, el Ministerio de Instrucción Pública notificaría la inscripción al dueño (art.24).

La inalienabilidad se convierte en el instrumento vital de la tutela pública del Patrimonio Monumental, tanto para aquellos bienes pertenecientes a cofradías, fábricas o instituciones eclesiásticas de cualquier clase, y aquellos que decoran iglesias y sus anejos y demás edificios públicos (art.2), como los que no estuviesen comprendidos en el catálogo, no perteneciendo a ninguna colección y que pertenecieran a dichas entidades, que deberían contar con la autorización del Ministro de Instrucción Pública (art.4). Se podría autorizar la enajenación, oído el parecer de la Comisión, a condición de que se realizase entre las entidades referidas en el artículo 2, o a favor del Estado (art.3). En el caso de los propietarios privados de bienes que estuviesen incluidos en el Catálogo, se le impondría una serie de obligaciones como el hecho de denunciar cualquier contrato de enajenación o cambio de posesión (art.5.1), la notificación del precio del objeto o monumento, aunque con efectos temporales, que duraría hasta que se hiciese la inscripción en el propio Catálogo (art.5.2), teniendo que advertir el vendedor al comprador que el monumento u objeto enajenable está inscrito en el Catálogo, y que se había efectuado la notificación. El derecho de prelación fundamentará la acción tutelar del propio Estado, determinante en la configuración de los sistemas normativos europeos, equilibrando los intereses privados y públicos. De esta manera en las ventas que quisiera realizar los particulares, el Estado

prevalecería sobre cualquier otro comprador (art.6), acción que tendrá un límite temporal, tres meses después de la enajenación, que se podría prolongar hasta seis meses cuando por la oferta simultánea de numerosas obras arqueológicas o artísticas, el Gobierno no dispusiera, de la suma necesaria para la adquisición (art.6.2). En caso de que cuando se ejercite el derecho de prelación a un objeto mueble, en virtud de la oferta que se hiciese desde el extranjero, ya sea de propiedad privada o de alguna entidad, se fijaría el precio descontando de la oferta el importe de la tasa de exportación a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley (art.6.3). Se establecería al mismo tiempo una tarifa de exportación progresiva sobre el valor del objeto en particular, que sería independiente a la dispuesta en la ley de aduanas, con exclusión de los bienes indicados en el primer párrafo del artículo 1º (art.8.1), fijándose el precio a discreción del propietario cotejada con la tasación oficial (art.8.2), que en caso de desacuerdo sería resuelta por una comisión de peritos que serían designados la mitad por el exportador y la otra mitad por el Ministerio de Instrucción (art.8.3), que en caso de empate sería designado un arbitro entre ambas partes y si no hubiere avenencia, lo designará el primer presidente del tribunal de apelación (art.8.4). El Gobierno tendría derecho a adquirir el objeto que se fuera a exportar con el precio fijo descontado el de los derechos de exportación (art.8.5), debiendo efectuarse la adquisición en el plazo de dos meses después de haberse fijado el precio (art.8.6). La tasa de exportación no sería aplicada a los objetos artísticos y arqueológicos importados del extranjero cuando constase así en el certificado legal prescrito en el reglamento (art.9).

Las limitaciones a los propietarios privados como a las entidades públicas que poseyesen bienes de interés histórico y artístico se ampliaría en el derecho de usufructo del propio bien, por lo que no se podría hacer sin autorización del Ministerio de Instrucción ninguna obra (art.10), especificando que el propietario privado no puede demoler indiscriminadamente un bien de interés histórico y artístico, aunque tiene derecho a que un representante del Gobierno los examine para ver si merecen ser conservados (art.11). Incluso el Gobierno tendría derecho a realizar las obras necesarias para impedir el deterioro de los monumentos (art.12). Con las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 12 de junio de 1902 se iniciaba en la regulación italiana la regulación del entorno de los monumentos, por lo que el ámbito de protección superaba al inmueble en sí para incorporar su espacio circundante. La actuación de la administración se va a detener especialmente en la posibilidad de prescribir la distancia que las nuevas construcciones debían establecer con respecto al monumento objeto de protección.

Sería en la regulación de las excavaciones arqueológicas donde se darían los pasos primordiales en el ámbito de la impronta tutelar del Estado. La instauración de un permiso administrativo por parte del Ministerio de Instrucción Pública será el punto vital de la regulación del patrimonio

arqueológico, incluso a los particulares, teniendo la facultada de inspeccionarle y de obliagarle a ejecutar estudios y cálculos; y de diferir el comienzo de las obras durante tres años, y hasta suspenderla cuando, por ser numerosas y simultáneas las solicitudes no sea posible vigilar a un mismo tiempo las excavaciones, o incluso o no se cumplan las prescripciones científicas para la buena marcha de las excavaciones (art.14.1). Al mismo tiempo se dispondría que la entidad o persona extranjeras que, con autorización del Gobierno y sujeción a las condiciones establecidas, en cada uno de los casos, emprendan excavaciones arqueológicas deberán ceder gratuitamente a una colección pública del Reino los objetos encontrados (art.14.2). En todos los demás casos, el Gobierno tendrá derecho a la cuarta parte de los objetos descubiertos o al valor equivalente (art.14.3). Sería regulado las obligaciones que tendría que asumir el excavador, por lo que debía de dar aviso inmediato del descubrimiento de cualquier monumento u objeto artístico o arqueológico, al igual que lo debía de hacer el descubridor fortuito (art.15), debiendo ambos conservar los monumentos descubiertos y a dejarlos intactos hasta que la autoridad competente los visite, teniendo el deber el propio Gobierno de de visitarlos y estudiarlos dentro de plazo brevísimo. (art.15). Al mismo tiempo, el Gobierno podría tomar todo género de providencias tutelares y las precauciones que estime necesarias o útiles para asegurar la conservación e impedir la subtracción y dispersión (art.15.3), incluso por razones de utilidad pública científica, podría ejecutar excavaciones en propiedad ajena, teniendo el dueño del fundo derecho a una indemnización *por el lucro alcanzado y el daño que las excavaciones le produzcan* (art.16). La expropiación forzosa estaría contemplada cuando fueran descubiertos restos o monumentos de tal importancia que el interés general reclamase su conservación y que fuera necesario para ampliar la excavación y para construir el camino de acceso no fuera posible dar entrada al público hasta ellos, no siendo posible dar entrada al público hasta ellos (art.17.1). La declaración de pública utilidad de dicha expropiación, oído el parecer de la comisión competente, se hará por Real decreto, a propuesta del Ministerio de Instrucción (art.17.2).

La asignación presupuestaria para adquisición de obras artísticas y arqueológicas daría una nueva vitalidad a la política institucional de tutela del Patrimonio Monumental. De esta manera se dispondría que además de los fondos anuales acordados en el presupuesto ordinario de gastos del Ministerio de Instrucción Pública que estuviesen destinados a la adquisición de obras de notable importancia arqueológica o artística y a las atenciones necesarias a su conservación, se inscribiría con el mismo fin, en un capítulo adicional al mismo presupuesto, una suma igual al total de los ingresos que en el ejercicio económico anterior se hubieran obtenido por la venta indicada en el artículo 18, la aplicación del arancel, las multas, las indemnizaciones establecidas en la presente Ley y por los rendimientos eventuales a que se refieren los artículos 14, 16 y 19 (art.20). Con este importe sería autorizado al Gobierno para hacer

adquisiciones sin necesidad de promulgar leyes específicas (art.22). Se establecería una normativa punitiva, por lo que serían nulas todas las enajenaciones hechas en contra de las prohibiciones determinadas en los artículos 2º y 3º (art.25.1), imponiéndoles a los empleados gubernativos, provinciales y municipales y los administradores de las personas legales de cualquier clase que sean, que la contravengan, serán castigados con una multa de 50 a 10000 liras (art.25.2), incluso en el caso de omisión de la declaración exigida por el artículo 5º será castigada con una multa de 500 a 10000 liras (art.26). A consecuencia de la violación de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º el objeto arqueológico o artístico no pudiera ser hallado, o hubiese sido exportado del Reino, o, en el caso del artículo 4º, hubiese pasado a propiedad privada, a la multa se unirá una indemnización equivalente al valor del objeto (art.27). Sería aplicable al mismo tiempo la ley de aduanas especialmente las confiscaciones, en caso de exportaciones clandestinas de obras artísticas y arqueológicas (art.28). El administrador de la personal legal que en un plazo de tres meses siguientes al aviso del Ministro de Instrucción Pública no hubiese presentado el correspondiente Catálogo de Monumentos correspondiente, siguiendo el artículo 23, se considerará una declaración fraudulentamente inexacta, será castigado con una multa de 50 a 10000 liras (art.31)

Unos meses después sería promulgada **la Ley del 27 de junio de 1903, por el que se modificaba la de 12 de junio de 1902. N° 185**, para la conservación de los monumentos y de los objetos antiguos y artísticos. Ya en su artículo 1º se dispondría un periodo temporal, hasta el cabo de dos años de la promulgación de la ley de 12 de junio de 1902, prohibiendo la exportación de los objetos antiguos procedentes de excavaciones que tuviesen notable importancia arqueológica o artística, a los que se añadirían también los objetos de gran valor para la historia y el arte descritos en el Catálogo, a los que se refiere el artículo 23 de la Ley de 12 de junio de 1902, núm.185, y especialmente en la parte del mismo Catálogo relativa a los objetos artísticos y antiguos, de propiedad privada(art.1.2). Sería designado un aparato institucional, agregando a cada oficina de exportación de exportación de objetos artísticos y antiguos serán agregados dos miembros, designados uno por la junta comunal de la ciudad donde la oficina se halla instalada, y otra por la comision conservatriz de los monumentos y objetos artísticos y antiguos de la provincia (art.2), pudiéndose oponerse cada delegado a la exportación de los objetos no comprendidos en el Catálogo en los cuales se atribuya una gran importancia arqueológica o artística (art.2). La apelación contra tal prohibición corresponderá en última instancia al Ministro de Instrucción Pública, oído el parecer de la comisión competente.

*- La Ley de 1909, Ley 364, La llege Rosadi y el Reglamento de 30 de junio de 1913 n.363.*

La promulgación de la **Ley de 1909, Ley 364, La Llege Rosadi**, y su posterior **Reglamento de 30 de junio de 1913 n.363**, se puede considerar, parafraseando a Cerulli, *quella dalla quale l'ordenamiento della materia in Italia ñe stato introdotto nei principi tuttora vigente*<sup>1605</sup>. Con la nueva ley promulgación de la Ley se ampliaba el concepto genérico de monumento por una amplitud en su precisión al considerar el bien a proteger *le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico*<sup>1606</sup>, y al mismo tiempo se introducía el principio de interés público, la obligación de conservar e poteri strumentali della publica administración. La Ley se presenta muy novedosa a la hora de acometer la protección de los bienes histórico-artísticos de interés público. Estas normativas constituyeron un verdadero precedente en orden a la limitación de los intereses privado del Patrimonio Histórico, entre los que cabe mencionar la inalienabilidad del Patrimonio del Estado de entes público y privados<sup>1607</sup> y la regulación del derecho de adquisición preferente por parte del Estado<sup>1608</sup>. El régimen de inalienabilidad absoluta, salvo autorización, de la cosse artistiche e storicche perteneciente al Estado, a los entes públicos, y a los entes morales (propiedad de personas jurídicas privadas), sería introducido en la Ley de 1902 (art.2 y ss) y confirmado en la Ley de 1909 (art.2). Sin duda alguna una novedad en el procedimiento lo constituyó el establecer un Vincoli sobre bienes públicos y privados, prohibiendo su venta, exportación o destrucción. Si los bienes fuesen privados el vincolo se llamará notifica.

#### **3.4.5. La Ley de 1902 del Estado de Hesse: la primera promulgación de la Ley de Patrimonio Monumental en Alemania.**

Desde principios del siglo XIX se irían promulgando las primeras normas tutelares del Patrimonio Histórico-Artístico en algunos de los estados alemanes, como fue el caso de Baviera que desde 1808 iría promulgando sucesivos decretos para censar y conservar los restos arqueológicos que iban siendo descubiertos, o en Prusia en 1815 La primera codificación del derecho

---

<sup>1605</sup> CERULLI, Vincenzo Beni Culturali e Diritti Collettivi en *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Vol.1.Milán, 1988, p.137.

<sup>1606</sup> Como apunta el propio Vincenzo Cerulli en la ley de 1902 se aplicaba a los monumentos que *abbiano pregio di antichità o d'arte*, mientras que en la Ley de 1909, *frutto della cultura idealistica dominante, si passò da una visione puramente estetica delle cose da tutelare ad una visiones storicistica e diremmo oggi, di civiltà*. Cerulli, 1988, p.137,

<sup>1607</sup> Art 2. *Las cosas mencionadas en el artículo anterior son inalienables cuando pertenecen al Estado. A municipios, provincias (...) instituciones eclesiásticas de cualquier tipo y cualquier entidad reconocida moral-*

Art.12. *Las cosas del artículo 2 no pueden ser demolidos, removidos, alterados o renovados sin la autorización del Ministerio de Educación.*

<sup>1608</sup> Art.6. El Gobierno tiene el derecho de comprar la cosa al mismo precio acordado en el contrato de venta. Este derecho debe de ejercerse dentro de dos meses (...) el plazo podrá ampliarse hasta cuatro meses (...) Durante este tiempo, el contrato queda sujeto a la condición de que se resuelva el derecho preferente (...).

prusiano sería elaborada bajo la iniciativa de Federico el Grande, los *Allgemeines Preubisches Landrechts*, estableciendo el principio de la conservación de la cosa de interés público: *Nella misura in cui la conservazione di una cosa abbia un'influenza rilevante sulla conservazione o promozione del bene comune, lo Stato é legittimato a interdire la sua distruzione o eliminazione*<sup>1609</sup>. Inspirado en el modelo francés del Inspector General de Monumentos Históricos (1830) y la Comisión de Monumentos Históricos (1837), se creó el órgano consultivo con la denominación de *Konservator der Kunstdenkmäler für den gesamten Bereich der Monarchie* (1843) (Conservador de los Monumentos Artísticos del interior del territorio de la Monarquía) y la *Kommision zur Erforschung und Erhaltung der Kunstdenkmäler* (1853) (Comisión para la riqueza y conservación de los Monumentos Artísticos)<sup>1610</sup>.

La promulgación de la Ley del Estado de Hesse en 1902 no solamente se convierte en la primera ley alemana de tutela del Patrimonio Monumental, sino una de las primeras legislaciones en la que el Estado intervendría incluso en el seno de la propiedad privada<sup>1611</sup>. La Ley estaría formada por 39 artículos, repartida en seis secciones, comprendida en: I) Monumentos en la propiedad de las personas jurídicas de derecho público (art.1-8); II) Monumentos en manos de la propiedad privada (art.9-17); III) Reglas especiales para casos específicos (art.18-24); IV) Excavaciones y Hallazgos (art. 25-30); V) Organización de la protección de monumentos (art.31-32) y VI) Monumentos Naturales (art.33-36). En la regulación de los bienes privados (artículos 9-17), los objetos portables están excluidos de la acción de la Ley y con respecto a los inmuebles, solo se protegen los que están incluidos en una lista oficial. La tarea de realizar esta lista lo hará la Comisión del Monumento (art.32). Se convoca por el Ministro del Interior y consiste en que los representantes de Iglesias católicas y protestantes, dos miembros de anticuarios de Hesse y dos residentes propietarios de inmuebles históricos. Un propietario será informado cuando sea clasificado y se le permite apelar contra la misma al Ministro del Interior en un periodo de cuatro semanas. Mientras que no sea declarado, será provisionalmente protegido, si la apelación prospera el monumento sería excluido de la lista, pero según el artículo 19, el monumento podría salvarse por una compra obligatoria. El Ministro puede desestimar la apelación y confirmar su inclusión en la lista, aunque no especifica con que fundamento y periodo temporal podría ejercer dicha potestad. Cualquier alineación, reforma

<sup>1609</sup> LÜTHER, Jörg *Il Diritto dei Beni Culturali nella Repubblica Federale di Germania*, en MEZZETTI, I beni culturali 1995, pp.211-212.

<sup>1610</sup> Un buen análisis de la evolución de la legislación de monumentos históricos y artísticos en Alemania, WÖRNER, H.J. *Monuments historiques*, nº 166, 1989, p.5 y ss.

<sup>1611</sup> La Ley ha sido objeto de una monografía con la celebración del centenario, SPEITKAMP Winfried *Origen y significado de la ley de protección de monumentos para el Gran Ducado de 1902*, Stuttgart, 2003.



de un inmueble privado tiene que ser notificado al Conservador General de Monumentos del Estado, a menos que reciba o no reciba una sanción especial estará obligado a no dar ningún paso hasta que no pase seis semanas. Derecho de exportación. El Estado está autorizado a limitar el derecho de propiedad privada. I. Asegurar la preservación de un monumento arquitectónico que haya sido abandonado de modo que ponga en peligro su identidad o partes esenciales del mismo; II. Efectuar la apertura de este monumento que pueda ser demandada por interés histórico y artístico siempre que no afecte a específicos intereses públicos o privados. El propietario puede solicitar que en vez de limitar sus derechos que el Estado adquiere su propiedad. El Estado está facultado a transferir el derecho de expropiación al ayuntamiento, distrito o provincia en que se ubique dicho monumento. La ley del Estado de Hesse se completaría unos años más tarde con la promulgación de la **ley de la excavación arqueológica de 26 de marzo de 1914 (Prusia)**.

#### **3.4.6. El derecho portugués de principios del siglo XX.**

A principios del siglo XX, Portugal va a vivir una etapa de concienciación patrimonial digna de mencionarse. Desde finales del siglo XIX van a ser promulgados una amplia disposición normativa, de la que destacan el **Decreto 28 de 10 de noviembre de 1875**, por lo que sería nombrada una Comisión para la preservación de Monumentos Nacionales, el **Decreto de 30 de diciembre de 1901 (DG nº 153, de 12 de julio de 1902)**, por lo que se aprobaban las bases para la clasificación de los monumentos nacionales y bienes muebles, el **Decreto de 19 de noviembre de 1910**, aprobando una *lei de protecção e defesa do património cultural* y el **Decreto nº 1, de 16 de maio de 1911**, reorganizando los Servicios artísticos y arqueológicos. La *ley de separación de Iglesia Estado de 20 de abril de 1911 (Diário de Governo, nº 92, 21 de abril)*, abrió el camino a la tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico, concretamente en el capítulo V, bajo el título *De destino de los edificios y de los bienes*, que en su artículo 93 dispondría que la *concesión gratuita de los edificios o muebles mencionados en el artículo 89, terminará, el culto público dejara de realizarse en cualquiera de esos edificios, desde que se verifique una de las siguientes hipótesis: 1º. Se asimismo o determine una ley por motivo superior de interés público y 2º. Que la Corporación encargada de culto será declarada extinta, o deje de cumplir las obligaciones con el Estado, o aplicar a los edificios o muebles los fines diversos al culto, o desvalorizar, dañar, inutilizar o perder, por acción u omisión, o desobedecer las prescripciones relativas a los monumentos artísticos o históricos.*

### **3.5. La incipiente función social de la propiedad y su proyección en la tutela del Patrimonio Monumental en el periodo de entreguerras (1915-1939).**

#### **3.5.1. La inclusión de la tutela del Patrimonio Monumental en el ámbito del derecho constitucional liberal.**

El desarrollo del constitucionalismo liberal en el periodo de entreguerras abre un nuevo capítulo en el proceso tutelar del Patrimonio Monumental, al convertir los bienes de interés histórico y artístico en bienes de interés público. Ya en el artículo 150 de la Constitución de Weimar del 11 de agosto de 1919, se dispone la protección del tesoro nacional y artístico: *Los monumentos de arte, la historia y la naturaleza, así como el paisaje, disfrutan de la protección y el fomento del Estado, regulando incluso su exportación: Compete al Reich impedir la emigración al extranjero del patrimonio artístico alemán.* Por su parte, la Constitución Republicana Italiana en su artículo 9 establecía que *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.* Sería insertada tras los Principios Fundamentales del texto constitucional, por lo que asumía della propozione, dello sviluppo e della elevazione culturale della collettività<sup>1612</sup>. La promulgación de la Constitución de 1933 de Portugal culminaba el proceso de la concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico al insertar en su artículo 52 que son *sometidos a la protección del Estado los Monumentos Artísticos, Históricos y Naturales y todas las obras de arte oficialmente reconocido como tales, estando prohibidas la loro alienazione a favor de extranjeros.*

### **3.5.2. La consagración de los sistemas normativos fundamentado en el principio del Patrimonio Monumental como bien de interés público.**

*- La configuración del Patrimonio Monumental como bien de interés público en el derecho hispanoamericano durante los primeros decenios del siglo XX.*

La aparición de los Estados Liberales a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX en América Latina proporcionó una amplia normativa de conservación y protección de los bienes históricos artísticos, especialmente en el ámbito del patrimonio arqueológico<sup>1613</sup>. Al mismo tiempo señala que se va a consagrar el principio de que el patrimonio arqueológico es del dominio de la nación. En el siglo XIX, el interés gubernamental por proteger a los objetos precolombinos produjo dos oleadas legislativas, una, en la primera década después de la independencia, y la segunda, en los últimos años del siglo. Ambas se relacionaron de manera específica con el proceso

<sup>1612</sup> ALLIBRANDI, ALLIBRANDI Y FERRI, *I Beni Culturali e Ambientale*, GiuffrèEditore. 1985, p.11.

<sup>1613</sup> HARVEY, Edwin R. "Protección del Patrimonio Cultural en la legislación de AméricaLatina" *Patrimonio Cultural y Derecho*, 1, 1997, p.134. Edwin R. Harvey apunta como *tales normas incluían prescripciones sobre la aplicación de algunas de las clásicas técnicas de policía del derecho administrativo: prohibición de excavaciones y exportaciones arqueológicas sin permiso administrativo previo; prohibición de exportación sin autorización legal; permisos previos en materias de edificaciones en inmuebles monumentales, etc. No existe en esta época una política de patrimonio, propiamente dicha, a cargo del Estado o bajo su iniciativa, reduciéndose la acción pública a limitar excepcionalmente la iniciativa individual de las personas*

nacionalizador. La idea de que el patrimonio arqueológico es propiedad nacional va a subyacer desde el comienzo de la propia promulgación, como lo podemos ya encontrar en la ley peruana de 1822 estableciendo un límite a la exportación de objetos precolombinos, justificando tal disposición al considerar que *los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú, son una propiedad de la nación, porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos, Con dolor se ha visto hasta aquí vender objetos inapreciables, y llevarse a donde es conocido su valor, privándonos de la ventaja de poseer lo nuestro*. Un rápido repaso a la evolución legislativa proteccionista del patrimonio precolombino nos lleva a la afirmar tajantemente que aunque las medidas proteccionistas en muchos casos no se cumplieron se adelantaron en alguna medida a los planteamientos que se habían realizado en el ámbito europeo: La delimitación de calificar a los bienes arqueológicos como dominio público, cuya propiedad exclusivamente pertenecían al Estado. ¿Qué subyace en esta? El sentido nacionalista de los países recién independizados de España, que buscaba en el pasado precolombino una realidad pretérita que rompiera los lazos histórico que hasta este momento habían tenido con la Península Ibérica, por lo que como afirma Rebeca Earle *las élites políticas e intelectuales de las nuevas repúblicas hispanoamericanas lucharon a lo largo del siglo XIX para establecer un pasado que consideraban funcional para las naciones que bregaban por crear y que veían como propias*<sup>1614</sup>.

### México.

El caso de México puede ser paradigmático del derecho hispanoamericano sobre protección del Patrimonio Arqueológico que se fue gestando en el ámbito del periodo liberal. Desde la independencia de México en 18 se iría gestando una verdadera concienciación patrimonial que dio como resultado la configuración de un peculiar derecho público del patrimonio histórico-artístico<sup>1615</sup>. El 28 de octubre de 1835 se promulga la Circular de la Secretaría de Relaciones, por el que se verificaba el cumplimiento de la prohibición de extraer monumentos y antigüedades mexicanas, que abre el camino a la potestad estatal sobre el patrimonio arqueológico. Maximiliano de Habsburgo promulgaría la Orden de 24 de noviembre de 1864, recopiladas en

---

<sup>1614</sup> EARLE, Rebeca *La nacionalización del pasado precolombino durante el siglo XIX* en GONZALEZ STEPHAN, Beatriz; ANDERMAN, Jens (eds.) *Galerías del progreso: museos, exposiciones y cultura visual en América Latina*. Estudios Culturales, 1ª edición: abril, 2006, p.29.

<sup>1615</sup> No debemos olvidar la existencia de una conciencia patrimonial anterior a la etapa independentista que se podría remontar a la propia etapa de Hernán Cortés, al disponer la conservación de los monumentos aztecas a fin de sustentar el valor cultural de las sociedades sometidas, hecho que justificaba y revaloraba la empresa de los conquistadores a la vista de la metrópoli. Posteriormente, con la colonización del territorio serían los criollos a lo largo del siglo XVIII y principio del siglo XIX, quienes conservaron, protegieron o bien destruyeron, en su carácter de propietarios, el acervo arqueológico mesoamericano (...). Tampoco se puede dejar de lado muchas disposiciones oficiales como la del virrey Revillagigedo que ordenó el rescate y resguardo de los monumentos dedicados a la Coatlicue y la Piedra Solar-Calendario Azteca.

las Leyes y Decretos del estado de Yucatán, donde se establecía el cuidado de los *monumentos antiguos* y la prohibición que se hagan excavaciones en la península y que tomen de ellos parte por pequeña que sean. Un paso más en la intervención estatal sobre el patrimonio arqueológico sería la Resolución del Ministerio de Justicia del 28 de agosto de 1868, por el que mandaba que las antigüedades que se encontrasen en toda la República no fueran exploradas por individuos particulares. Durante la restauración de la República, con el Gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se vuelve a reiterar la propiedad de los bienes nacionalizados. Con la separación de los poderes de la Iglesia y el Estado a raíz del decreto de 14 de diciembre de 1874, se confirmaba la nacionalización de los bienes eclesiásticos. En su artículo 16 de la sección segunda se establecía que *el dominio directo de los templos que conforme a la ley de 12 de junio de 1859, fueron nacionalizados y que se dejaron al servicio del culto católico, así como de los que con posteridad se hayan cedidos a cualesquiera otras instituciones religiosas, continúan perteneciendo a la nación; pero su uso exclusivo, conservación y mejora serán de las instituciones religiosas a quienes hayan cedido*. El 24 de septiembre de 1877 se promulga una Circular de la Secretaría de Fomento por el que deben de cuidarse los monumentos por ser de la nación, subrayando el carácter nacional del patrimonio<sup>1616</sup>.

Con el gobierno de Porfirio Díaz se inaugura una nueva fase en la conservación de los monumentos, con la creación, del cargo del inspector y conservador de monumentos arqueológicos de la república, el 8 de octubre de 1885. Entre sus atribuciones se incluían la de la *conservación de todos los monumentos y ruinas arqueológicas e históricas de la República*. Como afirma Enrique Florescano *el régimen porfiriano preparó las condiciones del patrimonio cultural que han regido el siglo XX; inició la legislación específica para la conservación del patrimonio cultural, referidas a los monumentos arqueológicos inmuebles*<sup>1617</sup>. En la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, del 26 de marzo de 1894, en su artículo 14, fracción IV, se establece que son propiedad de la Nación los terrenos en que se encuentren ruinas monumentales. La medida se completaría con el Decreto de 3 de junio de 1896 por el que se autorizaba al Ejecutivo para conceder permisos a particulares para hacer exploraciones arqueológicas, como consecuencia de los intensos saqueos y tráfico de bienes arqueológicos que se estaba dando en el país que tendría como objetivo establecer un control sobre las exploraciones arqueológicas mediante la figura de la concesión administrativa, facultando al Ejecutivo para autorizar a los particulares sobre la actividad. Con el Decreto del 11 de mayo de 1897, se declaraba en su primer artículo se declaraba que *los*

<sup>1616</sup> LITVAK KING, Jaime; GONZALEZ R. Luis y GONZALEZ, María del Refugio Arqueología y derecho en México. Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp.184-186.

<sup>1617</sup> FLORESCANO, Enrique *El patrimonio cultural de Mexico*, 1993. Fondo de Cultura Económica

*monumentos arqueológicos en territorios mexicanos, son propiedad de la Nación. Se definían a los monumentos arqueológicos como las ruinas de ciudades, las Casa Grandes, las habitaciones trogloditas, las fortificaciones, los palacios, templos, pirámides, rocas esculpidas o con inscripciones, y, en general. Todos los edificios que bajo cualquier aspecto sean interesantes para el estudio de la civilización o historia de los antiguos pobladores de México, y en su artículo 6º las antigüedades mexicanas, códices, ídolos, amuletos y demás objetos o casas muebles, que el Ejecutivo Federal estime como interesantes para el estudio de la civilización e historia de los aborígenes y antiguos pobladores de América, y especialmente de México, no podrán ser exportados sin autorización legal. El Decreto del 18 de diciembre de 1902, sobre la clasificación y régimen de bienes inmuebles de propiedad federal, establecía en el artículo 4º del Capítulo II: Son bienes de dominio público o de uso común dependientes de la federación los siguientes: XIV. Los edificios o ruinas arqueológicas o históricas, y en su artículo 35 se añade que los monumentos artísticos en lugares públicos federales y la conservación de los monumentos arqueológicos e históricos son de la incumbencia de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. De gran interés es el contenido del artículo 38 referente a los bienes del Patrimonio Monumental Eclesiástico, donde ya se dispone la tutela pública del Estado sobre ellos: Los templos y sus dependencias, que se hallan al servicio del público, y que estén a cargo del clero, en todo lo que se relacione con su uso, conservación y mejora, quedan bajo la vigilancia del Gobierno, sin cuyo permiso, dado por la Secretaría de Hacienda, no se podrán ejecutar en ellos obras materiales susceptibles de afectar la solidez del edificio, o sus méritos artísticos o históricos. Cabe mencionar un gran número de Circulares a los propietarios privados que se abstengan de dañar los bienes históricos-artísticos que mantienen en su poder. Así en la Circular de 11 de marzo de 1907 establece que los bienes que representan un valor real, histórico o artístico la ley ha concedido al clero católico el uso de los templos imponiéndoles el deber de conservación como propiedad de la nación<sup>1618</sup>.*

*El destino de los bienes religiosos de interés histórico-artístico como Patrimonio Nacional.*

Las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos que los liberales decretaron al tomar el poder, incidieron en la conservación de los monumentos en dos sentidos. Por una parte, protegieron los bienes muebles, pues la ley de 12 de julio de 1859, en su artículo 12 dispondría que *los libros impresos,*

---

<sup>1618</sup> WILLIAMS GARCIA, Jorge “Protección jurídica de los bienes arqueológicos e históricos”. *Cuadernos del Instituto de Antropología*, Universidad Veracruzana, México, D. F., 1967, p.15. Aunque estas normas serían en uso hasta el 30 de enero de 1930, señala Williams García que *a pesar de su existencia, puede asegurarse que se ignoró durante su periodo de vigencia, pues coincidió con los años de revoluciones y asonadas en que el gobierno fue inestable. La vigilancia y el control sobre las zonas arqueológicas fue deficiente y aún no se le daba la debida importancia histórica. Las investigaciones se dejaron en manos de extranjeros que bajo concesiones del gobierno exploraron y saquearon nuestro patrimonio cultural. La misma dirección encargada de la aplicación de la ley estaba situada dentro de una secretaría ajena a toda promoción cultural, como lo era la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento*



*manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas, se aplicará a los museos, bibliotecas y otros establecimientos públicos.* En el artículo 11° precisaba que el Gobernador del Distrito y los gobernadores de los Estados, a pedimiento del M.R. arzobispo y los RR. Obispos diocesanos, designarían los templos regulares suprimidos que debían quedar expeditos para los oficios divinos, calificando previa y escrupulosamente la necesidad y utilidad del caso. Sin embargo, con la ley de 12 de julio de 1859, en su artículo 50, ya se inserta la manera de dividir los edificios de las comunidades suprimidas, que incluso llegó a suponer la destrucción de algunos inmuebles para la apertura de calles. De acuerdo con el reglamento de esta misma ley, se crearía una oficina especial para recibir los bienes nacionalizados, con lo que nacería el inventario de las nuevas propiedades de la nación, que sería el germen de la posterior Secretaría de Bienes Nacionales creadas en 1952. Estos bienes desamortizados serían protegidos por el Estado mediante una circular del Ministerio de Hacienda, con la orden de que no se efectuase obras en los edificios de la nación sin autorización expresa del propio gobierno. El 14 de diciembre de 1874 se decretaría la independencia entre el Estado y la Iglesia, por lo que en su artículo 16 se confirmaba que el dominio directo de los templos que conforme a la ley de 12 de julio de 1859, fueron nacionalizados y que se dejaran al servicio del culto católico, así como de los que con posterioridad se hayan cedido a cualesquiera otras instituciones religiosas, continúa perteneciendo a la nación; pero su uso exclusivo, conservación y mejora serán de instituciones religiosas a quienes se hayan cedido. Durante la regencia de Porfirio Díaz se establecería un nuevo régimen en el destino de los edificios religiosos. Algunas iglesias serían devueltas al culto. En una circular de 11 de marzo de 1907, firmado por Limantour, se recomienda a los obispos que prevengan a quienes les corresponda, en la diócesis de su jurisdicción, que por ningún motivo dispongan de los objetos con que fueron destinados al culto de los templos que quedaron en poder del clero (...) los que representan un valor real, histórico o artístico pues la ley ha concedido al clero católico el uso de los templos imponiéndoles el deber de conservarlos como propiedad de la nación<sup>1619</sup>.

*El Patrimonio Arqueológico como dominio nacional.*

Durante la Revolución, Victoriano Huerta expediría una **ley sobre conservación de monumentos históricos y artísticos y bellezas naturales con fecha de 6 de abril de 1914**, que se convertiría en la base de leyes posteriores, en materia de conservación del Patrimonio Monumental en México, no solo por la institucionalización administrativa que se va a ir configurando, sino la introducción en el espíritu de la legislación de una auténtica conciencia pública de los bienes integrantes, que ya en su artículo 10 declaraba de *utilidad pública nacional la conservación de monumentos*,

<sup>1619</sup> FLORESCANO, Enrique, 1993, pp.173-175.



*edificios, templos y objetos artísticos e históricos que existen actualmente a lo que añade y la de los que lleguen a existir en lo sucesivo, en el territorio de los Estados Unidos de México.* En su artículo 3º se establecía la confección de un inventario: *Para cuidar de la conservación de los monumentos, edificios y objetos artísticos e históricos se hará un inventario cuidado que los contenga debidamente clasificado*, a lo que se uniría el nombramiento de la llamada Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos, que dependería de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (art. 4). Esta ley se convertiría en la base de leyes posteriores, en materia de conservación del Patrimonio Monumental en México, no solo por la institucionalización administrativa que se va a ir configurando, sino la introducción en el espíritu de la legislación de una auténtica conciencia pública de los bienes integrantes

El presidente Venustiano Carranza, en el mes de enero de 1916, promulgó en la ciudad de Querétaro la Ley sobre Conservación de Monumentos, en la que se definía la confección de un inventario que lo realizaría la Dirección General de Bellas Artes. Nuevamente reafirmaba la intervención del Estado en el ámbito de la conservación patrimonial, al requerir la autorización previa para la intervención y la exportación. El concepto cultura se incorporaría fue recientemente en la propia constitución mejicana en 1917<sup>1620</sup>. El 25 de agosto de 1919 se ordenó mediante un reglamento emitido por la Secretaría de Hacienda, la creación del Departamento de Bienes Nacionales, cuyas atribuciones estaban destinadas a la realización y cuidado de inventario y vigilancia de las obras de arte. El 29 de noviembre de 1921 sería convertida en Dirección de Bienes Nacionales, que tendría como facultad formar planos, avalúos y noticias de templos. **La Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 30 de enero de 1930**, expedida por el Presidente Provisional de México, Emilio Portes Gil, aumentaría el concepto de Patrimonio al incluir poblaciones típicas, cenotes, cavernas y habitaciones prehistóricas (...). El valor de lo antiguo volvería a ser el fundamento jurídico de la protección de estos bienes. Nuevamente se hace mención a la utilidad pública en el ámbito de la protección y conservación de estos bienes (art.40). La protección se extendería al terreno circundante al monumento, a la misma vez que los conjuntos declarados de aspecto típico y pintoresco. Al mismo tiempo se mantendría la prohibición para exportar monumentos, aunque manteniéndose la posibilidad de que hubiera algunos Monumentos Arqueológicos en el régimen de la propiedad privada, pero con las correspondientes limitaciones. De carácter más avanzado en la concepción pública del patrimonio sería **la Ley de 18 de enero de 1934 sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural**, que estaría vigente hasta 1968, al abrir

---

<sup>1620</sup> SCHROEDER CORDERO, Francisco Arturo *Legislación protectora de los monumentos y zonas de monumentos en México* en Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano. México, UNAM, 1984, p. 672.

ampliamente el concepto del patrimonio, no solamente reduciéndolo a su valor artístico o arqueológico, sino ampliándolo en el ámbito del posteriormente llamado patrimonio natural. En su artículo 1º considera monumento las cosas muebles o inmuebles, de origen arqueológico y aquellas cuya protección y conservación sea de interés público por su valor histórico, a lo que se completaría en el artículo 13 que declara que son *monumentos históricos, aquellos muebles e inmuebles posteriores a la consumación de la conquista y cuya conservación sea de interés público, por cualquiera de las dos circunstancias siguientes: a) por estar vinculada a nuestra historia política o social, y b) porque su excepcional valor artístico o arquitectónico los haga exponentes de la historia de la cultura*. En su artículo cuarto subrayaría que son *dominio de la Nación todos los monumentos arqueológicos inmuebles. Se consideran inmuebles, y por consiguiente pertenecen a la Nación, los objetos que se encuentran en monumentos inmuebles arqueológicos*<sup>1621</sup>.

### Argentina

No es hasta principios del siglo XX cuando en Argentina se comienza a promulgar una normativa legislativa en torno al Patrimonio Histórico-Artístico, concretamente en el ámbito del patrimonio arqueológico, con ley 9080 sancionada en 1913, y su posterior **Decreto Reglamentario del 29-12-1921**, que disponía la protección de las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico, y los declaraba propiedad de la nación (art.1 del Decreto)<sup>1622</sup>. La sanción de esta ley estuvo precedida por las sesiones del Congreso Internacional de Americanistas que se celebró en 1910, donde se manifestaba el interés por el estudio científico del pasado, a través de la recuperación, descripción y clasificación del pasado. En las sesiones de Congreso que precedieron a la sanción de la Ley 9080 se evidencia que el principal objetivo de la norma fue reivindicar el derecho del Estado sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos, incorporándolos en el dominio público. La norma era una novedad con respecto al anterior Código Civil de Vélez Sarsfield, al menoscabar el derecho de la propiedad privada, recogido en el espíritu liberal del momento por la defensa del interés general. De este modo, el propietario de un fundo en el cual hubiese un yacimiento dejaba de ser un titular de un dominio público, exclusivo e ilimitado sobre el suelo, para constituirse en un mero depositario de un bien público de la nación<sup>1623</sup>.

En el Reglamento posterior de 1921, definiría lo que se entiende por yacimiento arqueológico o prehistórico a todo lugar donde existen restos y ruinas, muebles o inmuebles de cualquier naturaleza que sean, que documenten la existencia y la civilización de las tribus indígenas y por yacimiento

<sup>1621</sup> HARVEY, Edwin *Legislación cultural en los países americanos*. Depalma, 1980.

<sup>1622</sup> SILVIA RAMUNDO, Paola “¿Cuál ha sido el rol del estado argentino en la protección del patrimonio arqueológico?” *Patrimonio, Cultura, Derecho*, 10, 2006, p.197.

<sup>1623</sup> BERBERIÁN, E.E. *La protección jurídica del patrimonio arqueológico en la República Argentina*, Comechingonia, 1º ed (1992).

paleontológico a todo lugar donde existen restos de fauna o flora fósiles y restos humanos o de industria humana, de épocas geológicas anteriores a la presente (art.2)<sup>1624</sup>. La exigencia del permiso especial previo a su exploración del Ministerio de Educación, exigiéndose que se acompañe a la solicitud una carta topográfica del lugar (art.5), no extendiéndose este permiso a más de un año (art.6), la exportación restringida del producto de tal explotación (art 7º), la posibilidad de expropiar los bienes arqueológicos, antropológicos y paleontológicos necesarios para el enriquecimiento de los museos nacionales y, consecuentemente, del patrimonio cultural nacional constituye algunas de las disposiciones del régimen liberal sobre la protección del patrimonio histórico-artístico<sup>1625</sup> De acuerdo con

### Peru

El caso de Perú también será paradigmático a la hora de configurar un marco jurídico de protección del patrimonio histórico-artístico frente a los intereses privados<sup>1626</sup>. El Decreto 89 de 2 de abril de 1822, dictado por uno de los primeros gobiernos de la recién constituida nación, pocos meses después de haberse declarado independiente por el general San Martín, prohibía la exportación de obras antiguas de alfarería, tejidos y demás objetos que se encontraran en las huacas, sin expresa y especial licencia del gobierno. En el Decreto Supremo 433 del 3 de junio de 1836 nuevamente se establecía la prohibición de extraer antigüedades y en el Decreto Supremo del 27 de abril de 1893 el Estado prohibía las exploraciones en huacas y ruinas sin licencias, declarando por primera vez como monumentos a las antiguas construcciones anteriores a la conquista y de interés público su conservación. Un paso importante lo constituiría el Decreto Supremo N° 2612 del 19 de agosto de 1911 al establecer que eran propiedad del Estado todos los objetos que se encontrasen en asentamientos arqueológicos, y en el caso de que se autorizase una excavación se nombraría un interventor que en representación del Gobierno vigilaría que se verificase los hallazgos. El tráfico ilícito del Bienes Culturales de Perú (Vease en Internet). La primera ley sobre protección del Patrimonio Histórico-Artístico se promulgaría en 1929, la Ley núm. 6634, bajo

---

<sup>1624</sup> El artículo 1º define al yacimiento *como todo lugar donde debido a circunstancias especiales, se encuentran acumulaciones de restos paleontológicos, cuya explotación metódica convenga a los intereses de la ciencia.*

El artículo 2º define al Yacimiento arqueológico o prehistórico, *todo lugar donde existen restos o ruinas, muebles o inmuebles de cualquier naturaleza que sean, que documenten la existencia y la civilización de las tribus de indígenas que habitaron este país antes del descubrimiento de América. Yacimiento antropológico, todo lugar donde existen restos humanos de indígenas, anteriores o posteriores al descubrimiento de América. Yacimiento paleontológico o paleontropológico, todo lugar donde existan restos de fauna o flora fósiles y restos humanos o de industria humana, de épocas geológicas anteriores a la presente.*

<sup>1625</sup> HARVEY, Edwin R. *La política cultural en Argentina. Políticas culturales: estudios y documentos.* Unesco, 1977, p.60.

<sup>1626</sup> Una interesante reflexión sobre la construcción jurídica del Patrimonio Cultural en Perú, HONORES, Renzo, *Titularidades y políticas legales: El caso del Patrimonio Cultural de Perú. Patrimonio Cultural y Derecho*, 4, Madrid, 2000, pp.193-210.

los auspicios de Augusto B. Leguía, **por el que se creaba el Patronato Nacional de Arqueología de Peru**, al considerar como propiedad del Estado los monumentos históricos existentes en el territorio nacional anteriores a la época del Virreinato (art.1), siendo inalienable e imprescriptible el derecho de la nación sobre dichos movimientos. Serían considerados como monumentos históricos para los efectos de la ley, los inmuebles comprendidos en la denominación de templos, palacios, fortalezas, edificios, ruinas y paredones, monolitos, piedras y rocas labradas, cementerios, chulpas, sepulcros, nichos construidos en peña o greda, en cuevas, grutas o subterráneos, dólmenes, huacas, caminos, puentes, acueductos, canales, baños, ruinas de pueblos y ciudades y en general, cuantas construcciones, restos o residuos de labor humana anteriores a la época mencionada, sirvan de estudio para el conocimiento de civilizaciones y la historia de los antiguos pobladores de Perú (art.2). Al mismo tiempo serían considerados de dominio público los restos humanos, tejidos, amuletos, artefactos de madera, cobre, plata, oro, barro cocido, piedras y cualesquiera otro material, herramientas, utensilios y demás objetos de cualquiera otra naturaleza y aplicación contenidos en los monumentos a que se refieren los artículos anteriores, incluso en los casos que fueran descubiertos o se extrayeran de terrenos de propiedad particular (art.3). Serían considerados de dominio privado los objetos arqueológicos de la especie enumerada en el artículo 3º, que a la promulgación de esta ley se encuentren en poder de particulares, pudiendo el Estado ejercer sobre ellos el derecho de retracto en caso de venta (art.4). Sería contemplada de igual manera la expropiación de terrenos de propiedad privada donde estuviesen ubicados los inmuebles arqueológicos a que se refieren los artículos precedentes (art.5). Se impondría una sanción pecuniaria, de diez a cien libras peruanas, aparte de la responsabilidad penal, todo acto de exploración o excavación en los yacimientos arqueológicos que no fueran expresamente autorizados por el Gobierno (art.6). El Gobierno podría conceder permisos tanto a las corporaciones científicas nacionales, previo informe del Patronato Nacional de Arqueología, para emprender trabajos de exploración y excavación, con el fin de extraer de ellos los objetos artísticos o históricos que contengan, siempre que la solicitud responda a propósitos serios de estudio y se destinen a los ejemplares descubiertos al enriquecimiento de los museos públicos (art.7), o a las sociedades científicas extranjeras mediante estipulaciones en convención diplomática, que garanticen el interés del Estado, cuidando bajo la vigilancia inmediata de un comisionado experto y de que se reservasen para el Estado los ejemplares únicos que se extraigan de los yacimientos y se adjudiquen al concesionario sólo los de especies duplicadas (art.8). Serían restringidas las exportaciones de bienes arqueológicos, sean de propiedad del Estado o de particulares, sino con permiso del Gobierno, so pena de comiso y de la multa de diez a cien libras peruanas (art.10). Aquellas antigüedades precolombinas que fueran de propiedad particular serían inscritas en un registro especial, que se abrirá en el Museo de Historia Nacional, concretizándose las traslaciones de

dominio que se efectuase después de inscritas, por lo que los objetos que no se hubieran inscritos durante el transcurso de un año, a contar desde el día en que se abra el registro, se reputarían de propiedad del Estado (art.11). Sería creada un Patronato Nacional de Arqueología destinado a la protección y conservación de los monumentos históricos, antigüedades y obras de arte de la época prehispánica cuyas funciones se reglamentarán por el Gobierno, cuyos miembros serían el Ministro de Instrucción, que la presidirá; el Rector de la Universidad Mayor de San Marcos, un delegado por cada una de las Universidades Menores, elegido por ellas mismas, el Director del Museo de Historia Nacional y el Presidente de la Sociedad Geográfica de Lima (art.13), al que se uniría un Patronato Arqueológico Departamental en la ciudad de Cuzco, que se compondrá del Presidente de la Corte Superior de ese Distrito Judicial, que lo presidirá, del Rector de la Universidad, del Ilustrísimo Obispo de la Diócesis, del Presidente del Instituto Histórico y del Alcalde del Consejo Provincial del cercado (art.14) , pudiendo crear el Poder Ejecutivo Patronatos Departamentales en las circunscripciones que estime convenientes (art.16). La promulgación de la **Ley 6634, de 13 de junio de 1929, sobre patrimonio histórico y arqueológico del Perú** completaría el régimen público del Patrimonio Arqueológico.

#### **La ley 9080, de 26 de febrero de 1913 de Argentina.**

En la misma línea, destacaría la **Ley argentina 9080, de 26 de febrero de 1913**, y su reglamentación por **Decreto de 29 de diciembre de 1921**, sobre ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. El proyecto fue presentado al Congreso en 1912, y en los debates se evidenció que el principal objetivo de la norma fue reivindicar el derecho del Estado sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos, incorporándolos al dominio público, separándolos de la propiedad del suelo regida por el derecho común. Se rompía como así había ocurrido en otros países del área, la concepción absoluta del dominio privado recogido en el Código Civil de Vélez Sarsfield, por lo que por primera vez en el derecho argentino, las ruinas y los yacimientos adquirirían un status especial, por lo que de este modo el titular de un dominio único, ilimitado y exclusivo del suelo, se convertía en un mero depositario de un bien perteneciente al dominio público de la nación, y al mismo tiempo, custodio de su integridad. En su artículo 1 sería declarado de propiedad de la nación, las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico, no pudiendo utilizar o explotar ruinas o yacimientos sin permiso del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, asesorado por la Dirección del Museo Nacional Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras (art.2). Establecía que el otorgamiento de permisos para utilizar o explotar los yacimientos correspondía al Ministro de Justicia e Instrucción Pública con el asesoramiento de los museos Nacional de Historia Natural y Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras. Los permisos para las exploraciones solamente



se concedían a instituciones científicas del país o del extranjero, siempre que demostrasen que se llevarían a cabo con fines de investigación científicas, y no comerciales.

### Guatemala

El **Decreto 791, de 14 de julio de 1922**, sobre monumentos de Guatemala<sup>1627</sup>, emitido durante el Gobierno de José María Orellana, creándose la Dirección General de Antropología, Etnología e Historia y Museo Nacional, bajo la Secretaría de Instrucción Pública. Se prohibía la práctica de excavaciones arqueológicas en los Monumentos Nacionales sin autorización previa de la Dirección General y regulaba las expediciones arqueológicas dentro del territorio nacional. Poco tiempo después, sería promulgado el Decreto Número 1376 Ley de Arqueología y Museos, 7 de mayo de 1925, que establecía que todos los monumentos y objetos arqueológicos contenidos dentro del territorio de la República sean propiedad exclusiva del Estado, y no podían ser enajenados a excepción de los objetos duplicados menores, que podían ser pertenecer a los descubridores.

### Colombia

Las riquezas arqueológicas persistentes en Colombia y el amplio expolio que se estaba produciendo desde los propios momentos de la colonización española, produjeron una conciencia patrimonial que se tradujo en una importante producción normativa desde el principio del siglo XX<sup>1628</sup>. La Ley 48, de 20 de diciembre de 1918, Ley sobre fomento de las Bellas Artes, sería la primera norma significativa del Patrimonio Histórico-Artístico, donde se dejaba ya definido el concepto público del Monumento Histórico en su artículo 8: *Los edificios y monumentos públicos, fortalezas, cuadros, esculturas y ornamentos de los tiempos coloniales, monumentos precolombinos y productos meteoricos, forman parte integrante del material de la historia patria, y quedan, en consecuencia, bajo la acción del Gobierno para efectos de la ley.* Aunque se reconocía la propiedad privada, ya encontramos restricciones por parte del Estado como la prohibición de destruir, reparar o destinar los edificios y monumentos públicos con fines diferentes sin autorización del Ministerio de Educación<sup>1629</sup>. A pesar de la modernidad de la norma, su ejecución quedaría muy limitada, por lo que los expolios de arqueólogos y coleccionistas extranjeros siguió siendo común, por lo que se promulgaría La Ley 47, de 30 de octubre de 1920, sobre Protección del patrimonio documental y artístico y

<sup>1627</sup> HARVEY, Edwin R. *Legislación cultural andina*, T. II, Bolivia, Convenio Andrés Bello, Bogotá, 1981.

<sup>1628</sup> MARQUEZ GUERRA, José Francisco *Protección jurídica del Patrimonio Cultural Colombiano. El pluralismo principio orientador de una cultura de paz*. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Jurídicas, Barranquilla, 2003.

<sup>1629</sup> MEJIAS, Juan Luis, "Legislación sobre el Patrimonio Cultural en Colombia" *Patrimonio Cultural y Derecho*, 3, 1999, p.201.



sobre bibliotecas, museos y archivos. Se articulaba unas medidas muy restrictivas en la esfera privada, especialmente en el ámbito de la exportación, al prohibirse de la salida del territorio papeles, documentos u objetos pertenecientes a bibliotecas, museos y archivos gubernamentales, sin permiso del gobierno, y previo dictamen de la Academia o cuerpo consultivo, al igual que aquellos que perteneciese a la propiedad privada, se limitaría su exportación, cuando tuviese interés histórico o fueran de alguna importancia para el Estado. Si la Academia de la Historia decidiera que un bien perteneciente a la propiedad privada no saliera de las fronteras, el Estado tendría la obligación de adquirirla. A pesar de que hay un avance significativo en esta norma, encontramos todavía carencias importantes desde el punto de vista técnico y doctrinal<sup>1630</sup>. La intensificación de los saqueos en el área de San Agustín va a derivar en una norma muy innovadora no solamente para el área hispanoamericana, sino en la legislación del Patrimonio Histórico en general, la Ley 103, de 30 de septiembre de 1931, en la que por primera vez se utiliza el concepto de Monumento nacional, declarando como tales *temples, sepulcros y su contenido, estatuas, lajas, estelas y piedras labradas, así como objetos de oro, alfarería, y demás utensilios indígenas que puedan ser utilizados para estudios arqueológicos y etnográficos*. Otras disposiciones serían la prohibición de venta y la exportación de los bienes recogido anteriormente, e incluso una medida de adquisición por parte del Gobierno para adquirir los territorios de la región de San Agustín, precedente de la zona pública arqueológica<sup>1631</sup>.

*La Ley de Antigüedades de 1906 USA (The Antiquities Acts).*

En el ámbito del derecho norteamericano, también se va ir vislumbrando una inquietud proteccionista en torno al Patrimonio Arqueológico, que aunque tuvo una tímida respuesta legal en el siglo XIX no sería un hecho hasta 1906 con la promulgación de la An Act for The Preservation American Antiquities. La promulgación de la ley contó con un amplio debate en el seno del Congreso, ya que en el fondo se estaba poniendo en cuestión el carácter absoluto del derecho de la propiedad privada<sup>1632</sup>. Una de las cuestiones más discutida fue el de la autorización administrativa sobre el permiso de la excavación arqueológica, ya que se le daría al presidente de los Estados Unidos la potestad para restringir el uso particular de terrenos públicos propiedad del gobierno federal, sin necesidad de requerir la supervisión del Congreso: *Que el Presidente de los Estados Unidos queda autorizado, en su discreción, para declarar, por proclamación pública histórica y prehistórica de estructuras, y otros objetos de interés histórico o científico que se encuentren*

---

<sup>1630</sup> MEJIAS, Juan Luis, 1999, p.202.

<sup>1631</sup> MEJIAS, Juan Luis, 1999, p.203.

<sup>1632</sup> PHELAN, M. Synopsis of the Laws Protecting Our Cultural Heritage, New England Law Review, vol.28, 1993.

*en las tierras de propiedad.* Al mismo tiempo sería sancionado a quienes destruyeran o dañaran las ruinas históricas o prehistóricas, o monumentos u objetos de la antigüedad, aunque se le sancionaría simplemente con multas de no más de 500 dolares o prisión de no más de noventa días. Algunos estados como el de Arizona, adaptó la ley federal como fue el caso de **la Arizona State Antiquities Act de 1927.**

*Un precedente en la legislación norteamericana: La Historical Site Acts of 1935, 21 de agosto.*

La promulgación de la Historical Site Acts en 1935 supone claramente una evolución en la concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico en el plano del Derecho Internacional, especialmente en la configuración de la figura jurídica del sitio histórico. En la sección I se proclama como obligación prioritaria de la política nacional la protección de *historic sites, buildings, and objects of national significance for the inspiration and benefit of the people of the United States*. En la Sección II se definen exhaustivamente cuales son las funciones que se le otorga a la potestad administrativa en relación a estos bienes, del que destacamos la a) *Secure, collate, and* ;b) *Make a survey of historic and archaeologic sites, buildings, and objects for the purpose of determining which possess exceptional value as commemorating or illustrating the history of the United States.* Al mismo tiempo se especifica la potestad administrativa en el seno de la propiedad privada del bien a proteger: *Make necessary investigations and researches in the United States relating to particular sites (...)*

### **Belice**

Belice va a contar desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX con una interesante normativa sobre protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico, donde se va a plasmar el conflicto de intereses entre el Estado y el derecho de la propiedad privada. Una primera normativa surge en 1894, cuando la colonización inglesa establece en el ámbito de la protección de los bienes arqueológicos la Ordenanza de Protección de los Monumentos Antiguos de 1894 (Ordenanza núm.7 de las Leyes de Honduras Británica, 1894), donde se especifica por primera vez, la responsabilidad del gobierno en la protección del Patrimonio Arqueológico, del que se nombra propietario, pero sólo de aquel ubicado en tierras propiedad de la corona del Imperio. Cinco años más tardes, se redacta una nueva Ordenanza de Protección de Monumentos Antiguos de 1897 (Ordenanzas núm. 5 de las Leyes de Honduras Británicas), que ampliará el marco protector estatal. Sería la Ley de 1924, 27 de marzo, la llamada Ordenanza de Monumentos Antiguos y Reliquias-Capítulo 152 (núm. 6 de las leyes de Honduras Británica), la que se convertirá en la base de la legislación posterior, aunque solamente se ocuparía de las antigüedades y monumentos previos a 1700 y que estuviesen ubicados en territorios de la Corona, dejando sin control gubernamental aquellos bienes de antigüedad que

estuviesen en tierras de propietarios privados. Se fija la autorización del gobierno para que se pudiese investigar por parte de particulares en los monumentos y antigüedades que estuviesen situados en tierra de la Corona, siendo declarada de su propiedad, aunque dividiría los materiales hallados entre el descubridor y el gobierno en partes equitativas. Un cambio significativo lo podemos encontrar ya a la hora de definir un verdadero Patrimonio Nacional como bien jurídico en la publicación de la Ordenanza para prevenir la exportación de Antigüedades, publicado el 21 de enero de 1929, que aunque se trataba de una ley muy breve, se inicia una amplia normativa restrictiva en el ámbito de la exportación, culminando en el Ordenanza de Tierras de la Corona del 4 de noviembre de 1933, que asumía el carácter público de todas las Antigüedades, incluso en el caso del dominio privado<sup>1633</sup>.

### Bolivia

La delimitación de la propiedad nacional sobre el patrimonio arqueológico nacional lo encontramos también en la Ley Boliviana de 3 de octubre de 1906 cuando declararían propiedad de la nación las ruinas de Tiahuanaco, las existentes en las islas del Lago Titicaca y todas las de la época incásica o anteriores que existen o descubrieron en el territorio de la República<sup>1634</sup>. Bolivia promulgaría su primera ley de protección del Patrimonio Histórico el **8 de mayo de 1927**, bajo el epígrafe de Patrimonio Nacional. En su artículo 2º definiría genéricamente el concepto de Monumentos Nacionales como *aquellos existentes en el territorio de la República y que por sus méritos artísticos o arqueológicos representarían un valor de arte o de tradición* y de manera específica lo recogería el artículo 3º comprendiendo *las piezas arqueológicas, documentos, condecoraciones, muebles, pinturas, esculturas, y demás objetos de interés artístico e histórico*, incluso los pertenecientes al régimen de propiedad privada, *que pudieran existir en poder de congregaciones religiosas, corporaciones o personas particulares, quienes están obligadas a presentarlas y exhibirlas ante la comisión o sus agentes en el lugar que se encuentren, conservando la posición de los objetos, debiendo en caso de venta o negociación dar aviso a dicha comisión*. Al mismo tiempo se precisa *que las obras así declaradas no podrán ser exportadas del territorio de la República, refaccionadas o restauradas, sin previo aviso y autorización de la Comisión de Bellas Artes y Arqueología*(Art.4). Como institución administrativa sería creada una Comisión ad honorem y una Galería Nacional de Bellas Artes, Historia y Arqueología, dependiente del Ministerio de Instrucción, que se encargaría de la clasificación y resguardo de los valores artísticos e históricos (art.1). La Ley de 1927 se completaría con las Normas sobre Monumentos Nacionales por Decreto Supremos de 15 de abril

---

<sup>1633</sup> MUÑOZ VILLAREAL, Alberto Análisis de la normativa y legislación del Patrimonio Cultural de Belice, *Patrimonio Cultural y Derecho*, 9, 2005, pp.232-235.

<sup>1634</sup> HARVEY, Edwin, R. *Legislación cultural andina*, T. II, Bolivia, Convenio Andrés Bello, Bogotá. 1981, pp. 147-148.

de 1930, que en su Exposición de Motivos subrayaba el papel del Estado en el ámbito del Patrimonio Histórico-Artístico: *Es un deber de los poderes públicos resguardar y conservar las obras y monumentos de arte de la República*. Al mismo tiempo se daba un paso importante en la configuración del Patrimonio Histórico-Artístico como bien de interés nacional al intervenir en el ámbito del sujeto privado al declarar Monumento Nacional *obras artísticas pertenecientes a particulares* (art.2º), teniendo los propietarios la obligación, en caso de venta de obras artísticas declaradas monumento nacional, de dar parte a la Dirección General de Bellas Artes (art.3º), no siendo en ningún caso autorizadas a exportarlas (art.4º). Las Normas especificaba qué monumentos serían declarados como Nacionales en las ciudades de Potosí (art.6º), La Paz (art.7º) y Sucre (art.8º), puntualizando obras de arte existentes en edificios públicos y privados.

## Chile

Durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma se va a poner en marcha la primera legislación chilena de Patrimonio Monumental<sup>1635</sup>. Con la publicación del **Decreto Ley 3.500, del 29 de junio de 1925**, se crearía la Comisión encargada de la vigilancia y conservación de los monumentos históricos nacionales, por lo que se generaría la política de protección estatal sobre los bienes arqueológicos descubiertos. Unos meses más tarde se promulgaría el Decreto-Ley chileno 651, de 17 de octubre de 1925, creando el Consejo de Defensa del Estado y la Sociedad Chilena de Arqueología, que se encargaría de la vigilancia y conservación de los monumentos históricos nacionales, definiendo que era un monumento nacional, estableciendo los recursos necesarios para la conservación del Patrimonio y las sanciones penales correspondientes<sup>1636</sup>. Las carencias de la Ley aparece aparecía reflejado en el trámite parlamentario del nuevo proyecto legislativo del 18 de marzo de 1969 como aparece reflejado estos términos: *Esta Ley original fue redactada a impulso de excelentes intenciones y varias de sus disposiciones, muy acertadas, tienen hoy plena validez. Pero, desde entonces, estas preocupaciones se han transformado en un complejo problema cultural y económico y en una verdadera disciplina científica y técnica. Es indudable que la ley vigente adolece de vacíos y que algunas de sus disposiciones requieren una urgente actualización (...) Además, la ausencia en dicha Ley de disposiciones definidas referentes a los recursos con que debería contar el Consejo de Monumentos Nacionales para su funcionamiento y para el cumplimiento de sus fines, que tampoco está claramente delineados, limita la esfera de acción de este organismo.*

<sup>1635</sup> NORDENFLYCHT C. *La conservación y restauración de Bienes Inmuebles en Chile: Visión Histórico-Crítica*, ICOMOS-CHILE, Monumentos y Sitios de Chile, Universidad Internacional SEK. Ediciones Altazor, Santiago, 1999, p.265.

<sup>1636</sup> El Decreto Ley N.651 sería derogado por la Ley 17.288 de 4 de febrero de 1970, en su artículo 46.

**- El modelo austriaco de tutela pública del Patrimonio Monumental: La Ley del Patrimonio Histórico de 1923.**

Austria contó siempre con una normativa proteccionista muy avanzada, que se traduce en una importante intervención del Estado como lo prueba el hecho de que el 31 de diciembre de 1850, se crearía la Comisión Central para la Investigación y el Cuidado de los Monumentos, adscrita al Ministerio de Industria y Obras Públicas, y posteriormente al de Educación y Cultura, que en 1875 pasaría a denominarse Comisión Central para la Investigación y Conservación de los Monumentos Históricos y Artísticos, abriendo el campo de protección a un amplio abanico de bienes de naturaleza distinta, como eran los objetos de carácter prehistórico o de la antigüedad; Objetos arquitectónicos, pinturas y artes gráficas desde la Edad Media y hasta finales del siglo XVIII y Monumentos Históricos de distinta clase desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII. No obstante, la Comisión Central no tendría potestad ejecutiva, quedando solamente en un mero órgano consultivo, aunque no cabe duda de que desempeñaría un importante papel en la concienciación pública del Patrimonio Histórico. Ya en 1911 se elaboró un nuevo estatuto para la Comisión Central por el que se creó un órgano de tipo administrativo y técnico (*Staatsdenkmalamt*), antecesor del actual *Bundenkmalamt*<sup>1637</sup>. Con la ruptura de la monarquía austro-húngara, que temiéndose una salida masiva de obras de arte, se promulgó en 1918 la *Ausfuhrverbotgese*, la primera confección de una ley sobre exportación de bienes histórico-artísticos. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1920, una de las más antiguas del ordenamiento constitucional vigente, se insertaba el régimen federal como organización político-administrativa, por lo que se atribuiría como competencia exclusiva de la Federación la protección y conservación del Patrimonio. En bases a las pautas constitucionales, se procedió a la promulgación de la *Denkmalschutzgesetz* (Ley de Protección de los Monumentos), de 1923, que sigue en vigor en nuestros días, aunque ha ido sufriendo algunas reformas posteriores para adaptarse a la normativa internacional, como fue en 1978 y la de 1990, la última de las reformas.

*La concepción jurídica del Patrimonio: El concepto de Denkmal.*

La Ley de 1923 incluía el concepto de Denkmal en el que abría el concepto restringido del Patrimonio Monumental, que aparecía perfectamente perfilado en el artículo 1º, concretamente objetos muebles e inmuebles de creación humana, que poseyeran significado histórico, artístico o cualquier otro significado cultural, cuya conservación venía exigida por interés público. De esta manera se excluían aquellos bienes referentes al Patrimonio Natural, reafirmado por el pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional en su sentencia 1929/1240, a raíz de un recurso planteado por el Gobierno Federal

---

<sup>1637</sup> BERMEJO LOPEZ, María Belén La legislación protectora del Patrimonio Histórico en el sistema federal austriaco en *Patrimonio Cultural y Derecho*, 4, 2000, pp.153-155.

contra algunas disposiciones de la Ley de Salzburgo de Protección de la Naturaleza de 16 de mayo de 1929, en la que se subrayaba que el concepto de Denkmal se refería solamente a obras de hombre, por lo que se distanciaba de los bienes naturales. La tipología de los bienes ya había quedado establecida a su vez en los artículos 1 y 2 de la Ley de 5 de diciembre de 1918<sup>1638</sup>.

*La declaración de un bien histórico y artístico como bien de interés público y sus efectos jurídicos.*

En el artículo 2º se establece que un bien tiene un interés público cuando su *pérdida suponga un atentado contra la integridad del patrimonio cultural austriaco en su totalidad, sea por la calidad de dicho bien, por su número, por su variedad (...)* Al mismo tiempo se establecía un procedimiento administrativo de declaración de un bien fundamentado en el interés público, configurándose una clasificación jurídica de niveles de protección, como aparece regulado en el artículo 5º: *La existencia de un interés público en cuanto a la conservación de un bien individual, de un conjunto o de una colección, ha de ser declarada por la Administración federal del Patrimonio en virtud de tipo criterios de tipo técnico o científico.* La declaración acerca de si un bien debía ser declarado como perteneciente al Patrimonio correspondería al Bundesdenkmalamt, que se convertiría en el órgano que en exclusiva conocía de los asuntos relativo a la protección jurídica del Patrimonio.

*La potestad de la Administración tutelar sobre los bienes inmuebles declarados, incluso a los pertenecientes al dominio privado.*

En el párrafo 4.1 se establecería la obligación de conservación de los bienes, por lo que los propietarios debían de adoptar todas las medidas necesarias de mantenimiento del mismo, en el estado en que fue adquirido, por lo que se deriva la prohibición de destrucción sin autorización del BDA. Esta disposición supondría un paso más en la consecución de una activa protección del patrimonio, al implicar que el propietario debía de evitar medidas que evitase la degradación. Sería definido en el artículo 4.11 el concepto de demolición, la total destrucción de un bien, aunque pervivan elementos esenciales del mismo, que no solamente se consideraba como tal una actitud activa, sino por la pasividad del propietario o usufructuario por evitar las medidas acorde a su conservación. La enajenación de los bienes declarados serían prohibidos sin la preceptiva autorización (4.2), incluso la enajenación de bienes pertenecientes a una colección (art.4.3). Sin embargo, podía obtenerse la autorización de demolición, enajenar o reformar un bien protegido (art.5), concretamente del BDA, independiente de las decisiones adoptadas por otras autoridades sobre la misma, por lo que aunque las autoridades locales dieran una licencia para la demolición, podían ser denegadas a su vez por las instituciones del Patrimonio. Se concedía un periodo de tiempo de dos años

<sup>1638</sup> BERMEJO LOPEZ, María Belen, 2000, pp.162-164.



para demoler, por lo que si el interesado no hacía uso de la autorización, aunque no excluía una nueva solicitud (art.5.2). En cambio, no precisaría de la correspondiente autorización en los casos en que la adopción de tales medidas fueran necesarias para la conservación del bien (art.4.1 b) e incluso se debían de dar la autorización si se tratara de adoptar un bien a los fines litúrgicos a los que estuvieran destinados, y cuando se trataran de bienes pertenecientes a una iglesia o una congregación religiosa legalmente reconocida (art.5.5). En caso de que existiera peligro de destrucción de un bien, de enajenación o modificación de modo que fuera afectada su propia identidad, sin solicitud la pertinente autorización, las autoridades urbanísticas podrían de oficio o a solicitud del BDA, adoptar las medidas pertinentes (art.7), incluso se podían adaptar medidas antes de que llegase a poner en peligro la identidad del bien, a través de cualquier cambio de entorno, como la colocación de carteles publicitarios (art.8).

#### *El tratamiento específico del Patrimonio Arqueológico.*

En los artículos 9 y 11 quedarían incluidas toda una serie de medidas en orden a tutelar el Patrimonio Arqueológico, considerando en la legislación austriaca como un patrimonio específico, distinto en su naturaleza al resto de los bienes que configuraban el Patrimonio Arqueológico. El hallazgo causal de un bien arqueológico debía de ser notificado al órgano responsable del Patrimonio Monumental, el BDA, con el plazo inmediato de un día, aplicándole provisionalmente todas aquellas medidas necesarias para su conservación hasta que el BDA resuelva definitivamente su importancia para el interés público, teniendo un plazo máximo de seis meses desde la notificación del hallazgo para que pudiera resolverse (art.10.3). Las excavaciones arqueológicas quedaban asimismo reguladas, por lo que todas aquellas que se realizasen en tierra y en aguas oceánicas solamente se podían llevar a cabo con la autorización del BDA, siempre que estuvieran realizadas por profesionales, o que hubieran superado un examen llevado a cabo por una comisión de expertos constituida para tal fin (art.11.1), por lo que los encargados de la excavación debían de redactar un informe al BDA sobre el estado de la misma, enviándole todo tipo de información gráfica, como planos, diseños y fotografías.

#### *Medidas sancionadoras*

Se incluía un derecho sancionador en el artículo 14 debido a los daños causados al Patrimonio Monumental, así por los incumplimientos de las prescripciones contenidas en los artículos 4.1 y 5.1 de la Ley. Las sanciones podían ser impuestas tanto por la Administración como por los tribunales de primera instancia, si los hechos fueran punibles penalmente (art.14.1.3). Si fuera destruido un bien protegido sin la autorización del BDA, los tribunales podían imponerle una sanción pecuniaria, al igual que si no fuera posible la reparación del daño causado y la reposición a su estado original del bien, sería

aplicable una sanción pecuniaria por el valor del daño causado, incluso en los casos que no se pudiera valorar el daño y el coste de su reparación, podía preverse una pena privativa de libertad de seis meses. El procedimiento sancionador se llevaría a cabo antes las autoridades locales, y cabría recurso ante la BDA (art.14.6).

**- Bélgica: La Ley del 7 de agosto de 1931.**

En la ley belga del **7 de agosto de 1931** se establecería que son objetos de protección legal los monumentos y edificios cuya conservación es de interés nacional desde el punto de vista histórico, artístico o científico, cualquiera que sea su propietario<sup>1639</sup>. En el capítulo I se establecería el procedimiento de clasificación de un bien como Monumento Histórico y Artístico, que se haría a instancia de la Comisión Real de Monumentos y de Lugares, del alcalde y los concejales del municipio donde estuviese ubicados, cuya conservación fuera de interés nacional desde el punto de vista histórico, artístico o científico, en todo o en parte, clasificados por Real decreto y puestos bajo la protección del Estado. En caso de que fuera aprobada esta proposición, sería comunicada a los propietarios o los titulares de derecho reales inscritos.

**- Portugal: El Decreto núm. 20.985, de 7 de marzo de 1932.**

Un amplio número de disposiciones legislativas de tutela pública del Patrimonio Monumental serían promulgadas en Portugal en la que ya se puede ir percibiendo un cambio sustancial en la intervención administrativa, especialmente con la publicación del **Decreto nº 15216 de 14 de marzo de 1928**, reorganizando os Serviços artísticos e Arqueologicos y el **Decreto nº 15331 16,791 de 30 de abril de 1929**, creándose la Dirección General de Edificios y Monumentos Nacionales<sup>1640</sup>. No sería hasta la promulgación del **Decreto núm. 20.985, de 7 de marzo de 1932**, cuando se defina un verdadero marco legal de protección del patrimonio histórico artístico en el país luso. El Decreto establecería dos categorías jurídicas primordiales: el monumento nacional y los inmuebles de interés público. Los primeros serían definidos en el artículo 24 como aquellos *inmuebles cuyo valor artístico, histórico y arqueológico exijan su conservación en función del interés nacional*, mientras que los segundos serían dispuestos por el artículo 30 al considerarlos como *los inmuebles que, sin merecer la clasificación de monumento nacional, ofrezcan un considerable interés público bajo el perfil artístico, histórico o turístico*, siendo inscritos en un catastro especial. José Manuel Pureza anota como *la clasificación in ogetto no depende del status del titular del inmueble, in altri termini non solo gli immobili di proprietà dello Stato, ma anche gli immobili di proprietà di privati (questi ultimi previa audizione del proprietario) erano passibili di*

<sup>1639</sup> NYNS, M. *La legislation des monuments historiques en Belgique*.

<sup>1640</sup> Helena Cristina Marques da Silva Pedreininho *A evolução do Conceito de Património Nacional. A evolução do Conceito de Património Nacional. A evolução do Conceito de Património Nacional*. Universidade Lusitana de Lisboa, Dezembro de 1999.

*clasificazione, derivandone, per il rispettivo proprietario, doveri di non demolizione e di difesa e di conservazione dell'edificio*<sup>1641</sup>.

Se establecía una verdadera configuración de la institucionalización administrativa de la protección pública del Patrimonio Monumental, por lo que se dispondría que fuera el Ministro de Instrucción Pública, por intermediación de la Dirección General de Educación Superior y Bellas Artes, el que dirigiera la coordinación de los trabajos de carácter artístico y la guardia y conservación del patrimonio artístico y arqueológico del país (art.1). En el Ministerio de Instrucción Pública funcionará, bajo la presidencia de Ministro, como órgano de consulta, el Consejo de Bellas Artes, constituido por los siguientes vocales: el Director General de Enseñanza Superior y de Bellas Artes, que será vicepresidente; el Director General de Edificios Públicos y Monumentos Nacionales; el Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes; el Inspector General de Bibliotecas y Archivos; el Director de la Escuela de Bellas Artes de Lisboa; los Directores de los Museos de Arte Antigua, de Arte Contemporáneo; Un representante de la Academia de Ciencias; Un representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes; Un representante de la Asociación de Arqueólogos; Un representante de la Sociedad de Arquitectos; Tres artistas de mérito reconocido, siendo un pintor, un escultor y un arquitecto de la libre elección del Ministro y el jefe del Departamento de Enseñanza Superior y de Bellas Artes, el cual servirá como secretario sin voto (art.10). Entre las competencias del Consejo Superior de Bellas Artes estarían Dar el parecer sobre las propuestas de clasificación de Monumento Nacional o inmuebles de interés público (art.11.1); proceder a la adquisición de obras de arte y restos arqueológicos de los museos, a propuesta de sus respectivos directores (art.11.2); Supervisar la organización y el mantenimiento de los museos (art.11.3); Emitir un dictamen sobre la transferencia de los objetos de Museo a Museo, en los términos del artículo 55 (art.11.4); Proponer al Gobierno las medidas que juzguen conveniente para la conservación del patrimonio artístico y arqueológico nacional (art.11.5); Delegar, siempre que lo juzgue necesario, las funciones de inspección general de los museos y colecciones de arte pertenecientes al Estado y a las autoridades locales (art.11.6); Dar el parecer sobre las obras de grandes restauraciones que tienen como fin la reintegración de los monumentos y palacios nacionales. Serán sometidos a la aprobación Consejo de proyectos de Restauraciones y Restauraciones de los Monumentos Nacionales (art.11.7); La organización de exposiciones destinadas a estimular y desenvolver la actividad artística nacional, así como la representación de Portugal en las exposiciones internacionales de arte (art.11.8) y formular los proyectos para las principales fiestas y solemnidades nacionales (art.11.9). Se establecería la obligatoriedad

---

<sup>1641</sup> PUREZA, José Manuel *La protezione del patrimonio culturale in Portogallo*, en I Beni Culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di ordinamenti, Ed. Cedam, Padua (Italia), 1995, p.308.

del dictamen favorable del Consejo Superior de Bellas Artes acerca de la fundación de los museos artísticos y arqueológicos, el nombramiento de los representantes en los congresos de arte, o la impresión costeadada por el Estado, de obras que se refieran a asuntos artísticos o arqueológicos, las propuestas relativas a la clasificación de monumentos nacionales, la adquisición o adaptación de edificios destinados a museos o a abrigar colecciones de arte en exposiciones nacionales y extranjeras y la exportación excepcional y temporal de obras de arte en poder del Estado, y especialmente los que forman parte de los museos (art.17).

La Dirección General de Educación Superior y Bellas Artes, promovería, a través de la cooperación de la Academia Nacional de las Artes, del Consejo Superior de Bellas Artes de la Inspección General de Bibliotecas y Archivos y de cualquier entidad pública o privada con competencia necesaria, la organización del inventario de muebles e inmuebles que tuviesen valor artístico, histórico o arqueológico y numismático digno de inventariarse, exceptuándose las obras de autores vivos (art.2). Dicho inventario constaría de dos partes: una, referente a muebles e inmuebles que se encontrase en propiedad del Estado o en posesión de las autoridades locales y cualquier otra entidades morales, por algún título o forma tutelada o subvencionada por el Estado, y otra referente a los muebles e inmuebles que estuviesen en posesión de particulares y de cuya existencia el Estado tuviese conocimiento por vía oficial o particular (art.3). El tratamiento legal variaría cuando los muebles perteniesen a particulares, ya que solo serían incluidos en el inventario aquellos que *sejam des súbito apreço*, reconocido valor histórico, arqueológico o artístico y cuya exportación del territorio nacional constituyera perjuicio grave para el patrimonio histórico, arqueológico o artístico del País (art.3). Las entidades mencionadas públicas estarían obligadas a presentar a la Dirección General de Educación Superior y de Bellas Artes dentro de los seis meses, a contar desde la publicación de este decreto, una relación descriptiva de muebles e inmuebles de la que forma que poseyeran. En caso de incumplimiento de esta obligación, sería sancionado como desobediencia calificada en los términos del Código Penal (art.5). Como en legislaciones anteriores, se establecería la inalienable, sin el previo consentimiento del Ministerio de Instrucción Pública, la propiedad, toda o en parte, de los muebles e inmuebles de valor artístico, arqueológico o histórico, que inventariados por las disposiciones del artículo 2º y que pertenezcan a las autoridades locales o cualquier otra entidad moral, incluyendo las de carácter particular, directa o indirectamente tuteladas o subvencionadas por el Estado (art.4º), teniendo en cuenta la facultad del Gobierno del derecho de preferencia, que en caso de que no hubiera acuerdo entre el Gobierno y las corporaciones poseedoras del objeto, respecto al precio, se solventaría bajo arbitraje (art.6), en número de tres, uno elegido por la corporación poseedora del objeto a vender, otra por la Academia Nacional de Bellas Artes y por la Inspección General de Bibliotecas y Archivos y otro por

el Gobierno, teniéndose en cuenta que el plazo para la resolución arbitral no podría exceder de noventa días, contando desde la fecha de la designación de los árbitros. En el caso de que al Estado no le conviniera adquirir el objeto con el precio que los árbitros fijaron, la corporación poseedora podría alinearlo dentro del país (art.6). De la misma manera, los particulares, individuos o colectividades, no podrían venderlo fuera del país sin la autorización de Ministerio de Instrucción Pública (art.7). Serían nulas las enajenaciones hechas contra las disposiciones del presente decreto y sin efectos, siendo los autores castigados con una multa equivalente a tres veces el valor de la cosa vendida (art.8).

Uno de los puntos fundamentales de esta ley sería la disposición por la cual un bien sería declarado Monumento Nacional, especificándose en el artículo 24 a aquellos inmuebles cuya conservación y defensa, en todo o en parte, represente el interés nacional, por su valor artístico, histórico o arqueológico. El decreto de declaración sería expedido por el Ministerio de Instrucción Pública, oído el Consejo Superior de Bellas Artes, a iniciativa de su propuesta para este efecto. Los inmuebles que fueran de propiedad particular serán igualmente clasificados, oído el respectivo propietario, lo que le permitirá al Gobierno proceder también a la expropiación con fines públicos, de conformidad con el párrafo 10, del artículo 20 de la Ley de 20 de julio de 1912, cuando se oponga a la clasificación. La expropiación se extendería a los lugares en que se encontrasen monumentos megalíticos, cuevas; astros, paredes rocosas, acantilados, monolitos, además de cualquier otro de idéntica naturaleza, limitada pero indispensable para la conservación y las investigaciones que hayan de efectuarse. El Gobierno podría también expropiar cualquier edificio o instalación que perjudice la buena conservación de los monumentos, ofender o desvirtuar su identidad, dentro de la zona de protección fijada para cada uno de los móviles clasificados. Como novedad se incluiría que los terrenos y edificios del Estado, de corporaciones administrativas, o pertenecientes a particulares, que distasen menos de 50 metros de cualquier inmueble clasificado monumento nacional, no podría ser enajenado sin la autorización del Consejo de Bellas Artes, que debería informar sobre la conveniencia de que el Estado mantenga o adquiera la posesión de los mismos o consienta la alineación. Los inmuebles que se hubiesen propuestos clasificar no podrían ser enajenados, alineados, restaurados o reparados, sin la autorización del Ministro de Instrucción Pública, previo conforme dictamen del Consejo Superior de Bellas Artes (art.27). Los inmuebles que, fueran merecedores de ser clasificados como monumento nacional, serían inscrito con esta designación inscrito en un registro especial, y ninguna obra de restauración podría llevarse a cabo sin que el respectivo proyecto haya sido superiormente aprobado, oído el Consejo Superior de Bellas Artes, siendo aplicable todas las otras disposiciones de esta ley concerniente a la clasificación, desclasificación, alineación, demolición y conservación de los monumentos nacionales (art.30),

incluso los efectos de la clasificación se mantendrán cuando los inmuebles clasificados cambie de propietario o detentor (art.31). Una vez notificada oficialmente la clasificación definitiva del monumento, a su propietario o usufructuario, se convertiría en responsable para su conservación y obligado a comunicar a la Dirección General de Instrucción Pública o Bellas Artes cualquier modificación o daños sufridos al inmueble, a fin de que el Consejo Superior de Bellas Artes tome las medidas necesarias (art.32), por lo que incluso cuando se tuviera conocimiento de cualquier modificación no autorizada en inmuebles clasificados, se podrá promover el embargo judicial, a lo que se añadiría la obligación que en las escrituras de transmisión a título gratuito u oneroso de cualquier inmueble considerado monumento nacional se instaría al nuevo poseedor el cumplimiento de las respectivas prescripciones, debiendo el antiguo propietario comunicar inmediatamente esa transmisión a la Dirección General de Ensino Superior y de Bellas Artes (art.32). Las infracciones o falta de cumplimiento de estas disposiciones, en lo que respecta a los monumentos nacionales, serían juzgados por los tribunales ordinarios y serán clasificados como causadoras de daños y perjuicios efectuados voluntariamente al Estado (art.33). El Ministerio de Instrucción Pública, a propuesta de la Dirección General de Instrucción Pública y de Bellas Artes, oído el Consejo de Bellas Artes, podría anular la concesión de título de Monumento Nacional o bienes de interés público, podrá ser anulada (art.37). Al mismo tiempo aquellos monumentos que pertenecieran al Estado o a corporaciones o instituciones sujetas a tutela administrativa solo podrían ser alineados por decreto firmado por el Ministro de Instrucción Pública, con el parecer favorable del Consejo de Bellas Artes (art.38). En caso de que un particular quisiese en condiciones legales vender un inmueble clasificado como monumento nacional o bien de interés público debería comunicárselo al Gobierno, indicando las condiciones de venta, de modo que se pueda utilizar el derecho de opción, que perderá si no hace efectivo en un plazo de sesenta días (art.40). Se establecerían una serie de disposiciones protectoras como fueron las servidumbres de alineamiento, como cualquier otras que puedan causar perjuicio a los inmuebles clasificados (art.42), no podrán ser demolidos en su totalidad o en parte, ni someterse a cualquier restauración (art.43), sin la autorización del Ministerio de Instrucción Pública y el dictamen favorable del Consejo Superior de Bellas Artes, incluyéndose los inmuebles que no fueran propiedad del Estado. Incluso sería prohibida ninguna instalación, construcción o reconstrucción, que pudiera ser ejecutada en las inmediaciones de un edificio clasificado sin la aprobación del Consejo Superior de Bellas Artes, confirmada por decreto ministerial, debiendo indicar a las autoridades competentes, respecto de cada monumento, cual era la extensión que se extiende esa área de defensa (art.45), y la fijación de anuncios en los inmuebles clasificados, bajo pena de multa, que será fijada en los respectivos reglamentos (art.46). Posteriormente con el decreto 21875 del 18 de noviembre de 1932 se establecería la institución de zona de protección de los edificios públicos de



reconocido valor arquitectónico y los edificios públicos no clasificados como monumento nacional, introduciendo la constitución del área non aedificandi attorno agli edifici stessi. La institución de zona de protección implicaba no solo que cualquier construcción o reconstrucción del dicho espacio necesitaba de la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y de las Comunicaciones, ma anche il divieto per le camere municipali di rilasciare la licenza alla costruzione o ricostruzione di edifici particolari in quelle zone di protezione senza la ricordata autorizzazione preventiva.

**- Brasil: Decreto-Ley n° 25 de 30 de noviembre de 1937.**

Decreto-Ley n° 25 de 30 de noviembre de 1937 (Brasil). En el artículo I ya se precisa el concepto de Patrimonio Histórico-Artístico Nacional que delimitaba el conjunto de bienes muebles e inmuebles existentes en el País y cuya conservación será de interés público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, que por. En el artículo 2° se precisa que la ley se aplicaría a los bienes pertenecientes *às pessoas naturais, bern como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno*. Se excluiría del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional las de origen extranjeros que pertenecieran a representantes diplomáticos o consulares acreditados en el país, a los que pertenecieran a casas de comercio de objetos histórico y artístico, que sean traídas para exposiciones conmemorativas, educativas o comerciales (De Tombamento?). El Decreto Legislativo 7 de Costa Rica, de 6 de octubre de 1938, sobre control de la explotación y comercio de reliquias arqueológicas, con el Decreto N° 14 del 20 de diciembre de 1938, constituye un claro ejemplo de la evolución del marco normativo sobre la cuestión de la propiedad privada y los intereses generales del Estado.

**- Un verdadero antecedente en el derecho contemporáneo del Patrimonio Monumental: La Ley 1-VI-1939. N.1089 de Italia.**

Con la promulgación de la Ley 1-VI-1939. N.1089, asistimos a la culminación de la construcción jurídica del Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Público no solo en el ordenamiento italiano sino en todo la producción normativa occidental. La conceptualización patrimonial se incluye ya en los artículos 1 y 2, delimitando dos bloques claramente diferenciados, donde todavía se aprecia la heterogeneidad de bienes en el proceso seleccionador de los mismos, con un parco sentido de coherencia en la clasificación material, al igual que se aprecia en el ámbito administrativo. Con relación al interés de la tutela patrimonial, es esencialmente un factor subjetivo, en cuanto no constituye un valor absoluto<sup>1642</sup>, No cabe duda que estamos ante

---

<sup>1642</sup> Cesare Caturani apunta que *La disciplina di tali beni veniva quindi sostanzialmente cocepita como insieme di limitazioni amministrative alle facoltà del proprietario, incentrandosi*

un modelo de tutela claramente innovador en el ámbito del régimen del derecho de la propiedad del bien que se quiere proteger, traduciéndose claramente en una intervención administrativa sobre los particulares<sup>1643</sup>. Así se instaura en el procedimiento tutelar una novedad, el concepto de *dichiarazione*, sustituyendo los términos de notifica y vincolo de la ley de 1909. Todos los bienes que tuvieran algunos de los intereses reconocidos por la ley están sujetos a la vigilancia de la administración de Patrimonio Histórico, que ha de velar para que sean respetados los derechos de uso y disfrute de estos bienes. Serían clasificados como inalienables cuando pertenezcan al Estado o a otro ente o institución pública, al igual que los propietarios de bienes que hayan sido objeto de notificación según lo dispuesto en la ley, han de notificar al Ministerio cualquier acto, oneroso o gratuito, en la transmisión de la propiedad o detención del bien. El derecho de adquisición preferente por el Estado está recogido en el artículo 31, así como la prohibición de la exportación de los bienes que no hubieran sido anteriormente inventariado (art.35). Sería en la regulación de las excavaciones arqueológicas donde se puede vislumbrar una verdadera concepción pública de la tutela, especialmente en el régimen de excavaciones por lo que todo aquel particular que deseara emprender excavaciones para el descubrimiento de antigüedades debía de hacer una solicitud al Ministerio de Instrucción Pública (art.14), debiendo notificar el encargado de una excavación debería notificar inmediatamente el descubrimiento de todo monumento u objeto de arte o antigüedad (art.15), obligación que se extendería a todo aquel que realizase un descubrimiento casualmente (art.15). Por razones públicas y científicas el Gobierno podría llevar a cabo excavaciones en terrenos que no sean propiedad del Estado. El propietario tendría derecho a ser compensado por toda pérdida o daño que sufre en estas excavaciones (art.16). La utilidad pública de la obra sería declarada por decreto del Ministerio de Instrucción Pública tras consultar con el Consejo de Estado. La compensación, cuando no pueda ser fijada amistosamente, se determinaría de acuerdo con la escala indicada en los artículos 65 y siguientes de la Ley de 25 de junio de 1865 en lo que se aplicable

---

*in questo modo la maggiore attenzione sui beni di proprietà privata. Veniva, viceversa, dedicata una minore attenzione ai beni di proprietà pubblica che erano suddivisi tra di beni demaniali ed i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato che erano inalienabili e comunque caratterizzati da una appartenenza funzionale al patrimonio culturale nazionale.*  
p.52.

<sup>1643</sup> En opinión de Victoria Quirosa, las principales características de esta Ley serían: El reconocimiento del particular valor cultural de una cosa, con todas las consecuencias e implicaciones que esto comporta para las cosas mismas y sus propietarios, también en relación con la circulación y uso de los bienes. El derecho de adquisición preferente por parte del Estado o de las Regiones en el caso de transferencias a título oneroso del propio bien. El régimen particular previsto para la exportación de bienes culturales. La peculiar disciplina para hallazgos y descubrimientos, así como el desarrollo jurídico para las cosas y zonas de carácter arqueológico. El régimen sancionador que tiene aspectos e implicaciones penales, administrativas y civiles.

(art.16). De los objetos descubiertos en la excavación, o de equivalente monetario, una cuarta parte pertenecerá al propietario del terreno y el resto al Gobierno. Sería incluida la expropiación forzosa por utilidad pública en caso de que se descubriese restos o monumentos de importancia tal que el interés público exiga su preservación (art.17). Los últimos artículos se ocupan de las multas por la infracción de estas prescripciones. Hay multas de cincuenta a diez mil liras. En caso de que no lo pagase sería por el Código Penal (art.33).

*- El Patrimonio Arqueológico como objeto de tutela pública en el derecho colonial.*

A finales del siglo XIX encontramos en Egipto una amplia producción normativa limitando todo tipo de exportación de bienes muebles, entre los que podemos destacar el Decreto de 20 de abril de 1880 por el que prohíbe la exportación de fragmentos y monumentos relativos a la egiptología; una ley del 18 de diciembre de 1881 declarando propiedad del Estado los objetos de fouilles; una ley de 16 de mayo de 1883 declarando propiedad de dominio público todos los objetos de antigüedades y monumentos; el decreto de 12 de agosto 1897 sobre los fouilles arqueológicos. La Ley del 12 de junio de 1912 acentuará la tendencia marcada por las disposiciones precedentes al declarar propiedad del Estado todas las antigüedades que se descubrieran sobre el suelo egipcio. El comercio, la exportación de las antigüedades y los restos arqueológicos serían reglamentados por las órdenes ministeriales de 1912. A ello habría que unir la Ley del 13 de abril de 1918 por el que protegería a los monumentos árabes. En Turquía también se desarrollaría una amplia promulgación de protección de bienes arqueológicos entre los años 1884 y 1907. En Túnez un decreto del 7 de noviembre de 1882 reglamentaría las excavaciones arqueológicas. En Grecia por la ley de mayo de 1834 y la posterior del 24 de julio de 1899, se declararían de propiedad del Estado todas las antigüedades.

**3.5.3. Hacia la configuración de un derecho internacional del Patrimonio Monumental.**

*- El deber de restitución de los bienes culturales a sus legítimos propietarios en caso de acontecimientos bélicos.*

La configuración de un verdadero derecho internacional de protección de Patrimonio Monumental en el ámbito contemporáneo, va a tener un claro tinte de contenido patrimonialista, en cuanto a que el reclamante lo hará no en virtud de un interés histórico o artístico sino como bien adherido a su dominio que ha sido confiscado sin ninguna legitimidad. Desde esta perspectiva podemos apreciar que desde finales del siglo XIX se van a ir promulgando algunas normas de tutela de bienes histórico y artísticos pero con el ánimo del legislador de devolver un bien confiscado, pudiéndose distinguir entre aquellas que al disponer el derecho de la propiedad privada en caso de guerra, quedaban incluidos las obras de arte, como bien inherente al propietario privado, y

aquellas normas que disponían que los Estados tenían el derecho legítimo de reclamar los bienes que le habían sido confiscados, entre los que se encontraban los de interés histórico y artístico, por lo que el propio Estado reclamante se comportaba como un propietario más. De ahí que podemos considerar que la legislación internacional que se iría delimitando en el periodo de cambio de siglo al igual que en el resto de los derechos nacionales estaba fundamentada en la concepción patrimonialista del Patrimonio Monumental propio del modelo liberal.

Si analizamos las primeras disposiciones que se van a ir promulgando en torno a la tutela de los bienes artísticos e históricos, podemos comprobar que su fundamento jurídico queda plenamente identificado con el respeto a la propiedad privada, como son los casos de las Órdenes Generales del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América, nº 100, las llamadas Instrucciones para el gobierno de las armas de los Estados Unidos en la batalla, elaborada por Francis Lieber y publicadas, por primera vez, en 1863, que al amparo de la prohibición de la destrucción de la propiedad privada, se consideraba que debía de ser protegido las obras de artes, colecciones científicas y bibliotecas<sup>1644</sup>, y en las convenciones de la Haya de 1889 y 1907, el primer sistema normativo de derecho de guerra en el ámbito contemporáneo<sup>1645</sup>, en la que se puede resaltar todavía un tratamiento a los bienes culturales como bienes patrimoniales, especialmente en el artículo 3 de la Convención de 1907, en el que se prohibía el pillaje y la confiscación de la propiedad privada, por lo que en el ámbito de los bienes del Patrimonio Monumental se prohibiría cualquier captura, incautación o daño intencionado de los monumentos históricos u obras de arte, siendo objeto de procedimientos legales en caso de producirse. Al mismo tiempo se establecían que aquellos bienes históricos-artísticos que fueran de propiedad pública debería recibir de la potencia invasora el tratamiento de los bienes privados, y a éstos se daba un tratamiento privilegiado, estableciendo al invasor el respeto y más concretamente la prohibición de su confiscación. Si se violase tales disposiciones, se establecerían dos tipos de responsabilidades: una individual penal para los sujetos que protagonizaran los actos de secuestro o destrucción de estos bienes; y una responsabilidad patrimonial del Estado en concepto de indemnización de los daños que pudiera causar los miembros del ejército. Sin

<sup>1644</sup>BADENES CASINO, Margarita, *La protección de los bienes culturales durante los conflictos armados*, Universidad de Valencia, Valencia, 2005, p.25.

<sup>1645</sup> Existe una amplia bibliografía sobre la normativa internacional sobre protección de los bienes históricos-artístico nacida al amparo de los conflictos bélicos durante los primeros decenios del siglo XX, TOMAN, Jiri *La protection des biens culturels en cas de conflit armé. Commentaire de la Convention et du Protocole de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection de biens culturels en cas de conflit armé ainsi que d'autres instruments de droit international relatifs à cette protection*. Collection Patrimoine mondial, Éditions UNESCO, 1994, FERNANDEZ-FLORES Y DE FUNES, José Luis, *El derecho de los conflictos armados*, Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 2001, pp.705-719.

embargo, la restitución del bien no sería usual en estos momentos dejando una verdadera laguna legal, que intentaría paliar una escasa doctrina sobre el mismo.

Será después de la Primera Guerra Mundial cuando comienza a promulgarse, junto a los tratados de paz, un gran número de cláusulas relativos a los bienes del Legado Patrimonial, en la que el Estado considerado legítimo propietario va a adquirir el derecho a reclamar que le sea devuelto las obras de arte confiscadas al formar parte de su propia esencia nacional. Sería Francia uno de los países que había sufrido una mayor pérdida, por lo que comenzaría a reivindicar su devolución, fundamentando en el hecho de que formaban parte estas obras artísticas del patrimonio nacional, como queda plasmada en una circular del gobierno galo firmada en 1918 instando a la recuperación del patrimonio perdido por el conflicto bélico: *Esta Comisión solicita vuestro concurso, invocando las razones de interés superior que pueden legitimar este paso, y que parece deben atraer la adhesión unánime de todos los que tienen empeño en defender el patrimonio intelectual y el honor moral de la Humanidad. El principio de justicia es inseparable de toda investigación de belleza como de toda obra de ciencia, y las más elementales nociones del derecho común son aplicables tan estrictamente a los Estados y a las Sociedades sabias o artísticas como a los particulares; un objeto precioso, un manuscrito raro, una obra de arte brillante o profunda, indebidamente sustraídos a una colección pública o privada, no podía ser aceptada o adquirida por unos y otros. Existe aquí, según nosotros, un deber de solidaridad y de justicia, que nos permitimos recordaros, más importante aún que una reivindicación de intereses personales.* Al mismo tiempo se ponía en entredicho el derecho de un particular a adquirir cualquier obra despojada en conflictos belicos de su legítimo dueño, en este caso la Nación: *Por otra parte, la adquisición de tales obras de arte, ¿no pondría a sus nuevos poseedores en muy delicada situación de conciencia, y prácticamente no les expondría un día u otro a legítimas reivindicaciones? Además que una obra notoria o sospechosa en razón de su carácter, de su importancia o de su rareza, llevaría a vuestro conocimiento el objeto de una proposición, y os bastaría señalar pura y simplemente el hecho a los representantes de Francia acreditados en vuestro país, o directamente al servicio establecido en París a este fin (...).*

Con el objetivo de recuperar los bienes despojados por causa bélica, el Gobierno francés en 1918 crearía una Comisión para su recuperación, cuyo Presidente, J.D'Esteornelles De Constant en una Circular del 15 de noviembre dirigida por el Ministerio de la Instrucción Pública, por el que se invocaba la primacía del principio del interés común de las naciones: *El Gobierno de la República francesa ha instituido una Comisión encargada de asegurar la salvaguardia de las obras de arte que los ejércitos enemigos hayan podido arrancar, tanto a las colecciones públicas o privadas, como a los edificios religiosos y civiles. Esta Comisión solicita vuestro concurso, invocando las razones de interés superior*

*que pueden legitimar este paso, y que parece deben atraer la adhesión unánime de todos los que tienen empeño en defender el patrimonio intelectual y el honor moral de la Humanidad. El principio de justicia es inseparable de toda investigación de belleza como de toda obra de ciencia, y las más elementales nociones del derecho común son aplicables tan estrictamente a los Estados y a las Sociedades sabias o artísticas como a los particulares; un objeto precioso, un manuscrito raro, una obra de arte brillante o profunda, indebidamente sustraídos a una colección pública o privada, no podía ser aceptada o adquirida por unos y otros. Existe aquí, según nosotros, un deber de solidaridad y de justicia, que nos permitimos recordaros, más importante aún que una reivindicación de intereses personales. Al mismo tiempo se reivindicaba la restitución de las obras de arte a su legítimo propietario: Las vicisitudes de una guerra de cuatro años han favorecido, en los países ocupados, el robo por la violencia o la dispersión, por el fraude, de una cantidad de obras de arte que eran orgullo de antiguas ciudades, o constituían los títulos de nobleza y el tesoro de recuerdos de muchas familias. Estos despojos eran ofrecidos (tal vez ya lo hayan sido) a los establecimientos artísticos y científicos o a los coleccionistas, ya por los mismos autores de los robos, ya por intermediarios, que el tiempo hará cada vez más indirectos o inconscientes. Será fácil, relativamente, para quien posea serios conocimientos en cosas de Arte, reconocer, o al menos sospechar, la procedencia de algunas de las obras robadas, y facilitar una equitativa restitución, ayudando así a la Francia a reconstituir una parte de este patrimonio de arte y de belleza, que tan libremente han puesto siempre ella al servicio de todo el mundo. Por otra parte, la adquisición de tales obras de arte, ¿no pondría a sus nuevos poseedores en muy delicada situación de conciencia, y prácticamente no les expondría un día u otro a legítimas reivindicaciones? Además que una obra notoria o sospechosa en razón de su carácter, de su importancia o de su rareza, llevaría a vuestro conocimiento el objeto de una proposición, y os bastaría señalar pura y simplemente el hecho a los representantes de Francia acreditados en vuestro país, o directamente al servicio establecido en París a este fin (...)*<sup>1646</sup>.

Sin embargo, se estaba alimentando más una actitud de confiscación que de reparación, como se refleja en un artículo publicado en el periódico francés *Lectures* por Tours en agosto de 1918 especificaba cuales eran las obras de arte que debían de ser entregada en pago a Francia a modo de indemnización, siendo dividida en dos grupos, un primero formado por las obras que habían de ser entregadas según criterios históricos, entre ellos los robado por Napoleón y repatriado tras su derrota en 1815, y un segundo obras de colecciones alemanas que por su interés histórico podían llenar los museos franceses. De la misma manera, Italia a principio de 1919 exigiría ante de la firma del tratado de paz, el requerimiento de todo tipos de obras como manuscritos, armaduras del Museo Militar austriaco y veintisiete de las mejores obras pictóricas de la Galería de Viena, casi todo de autores italianos. La respuesta del doctor E. Leisching, director de la Pinacoteca, ante los excesos que proponían los aliados es un verdadero alegato sobre la concepción nacional de las obras de arte: *Resulta difícil mantener la cabeza fría y al mismo*

<sup>1646</sup> Esta inserta la carta en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 1918.



*tiempo llamar por su nombre a todo este asunto. Lo que ahora está en juego es nada menos que la pérdida de obras que son la posesión espiritual de todos estos incontables miles que se creen con derecho al sentido de la belleza, a la educación, a la cultura, a una sensación de grandeza espiritual y dignidad humana que trasciende las fronteras nacionales. Son, casi exclusivamente, obras de origen nativo, y su pérdida sería profundamente sentida por toda la población, obras que se han abierto paso en los corazones y las mentes del pueblo. En una palabra (los italianos) quieren arrebatarnos, con un refinamiento cruel, lo que más nos dolería, posesiones empapadas en grado sumo de la personalidad y el espíritu de nuestra ciudad, que expresa ante el mundo entero la fama, el encanto y el alma misma de Viena<sup>1647</sup>.*

Con la firma de las cláusulas del **Tratado de 28 de junio de 1919** se adoptaría una serie de medidas de reposición. El artículo 245 especificaría que en el plazo de seis meses posterior a la entrada en vigor del Tratado, el gobierno alemán debía devolver al gobierno francés los archivos, recuerdos históricos u obras de arte sacadas de Francia por las autoridades alemanas en el caso en el curso de la guerra franco-prusiana de los años 1870-71, así como de la última contienda, de acuerdo con una lista que le sería comunicada al gobierno francés. De manera más concreta el artículo 247 estipulaba las reparaciones de la destrucción de la biblioteca de Lovaina, en los tres meses posteriores a la fecha en que fuera efectuado la solicitud y se transmitiera a través de la intervención de la Comisión de Reparación, de manuscritos, incunables, libros impresos, mapas y objetos de colección que se correspondieran en número y valor con los que resultaron destruidos en Alemania en el incendiario de la misma. Al mismo tiempo Alemania se comprometería a entregar a Bélgica, a través de la Comisión de Reparación, en un plazo de seis meses posteriores a la entrada en vigor al Tratado, las hojas del tríptico de *El Cordero Místico* de los hermanos Van Eyck, de la iglesia de San Bavón de Gante y estaba expuesto en el Museo de Berlín y las hojas del tríptico de la *Última Cena*, pintada por Dirk Bouts que había sido arrancada de la iglesia de San Pedro de Lovaina, que se había instalado dos en el Museo de Berlín y otros dos en la Antigua Pinacoteca de Munich. El **Tratado de Saint-Germain de 10 de septiembre de 1919** diseñaría un tratamiento más general para los bienes históricos-artísticos, por el que se establecía la obligación de restitución de aquellos bienes sustraídos de los territorios invadidos, que habían pertenecido a las instituciones públicas o privadas. Posteriormente, se promulgaría el **Tratado de Riga de 18 de marzo de 1921**, que regularía detalladamente la restitución de los bienes del Patrimonio Histórico-Artístico, en la que se establecía un régimen de restitución de bienes privados, para los que se exigía una demanda de restitución por parte del gobierno afectado, a los que se unían las compensaciones pecuniarias, a lo que se incluía un verdadero

---

<sup>1647</sup> CHARNEY Noach, *Los ladrones del Cordero Místico*, Ariel, septiembre de 2011, pp.161-162.

verdadero proceso de restitución, en la que se incluía un tratamiento particular de los archivos.

**- *La regulación internacional de la restauración de los bienes de interés histórico y artístico: La Carta de Atenas de 1931.***

Desde finales de la I Guerra Mundial se fue delimitando la génesis de un incipiente derecho internacional sobre protección del Patrimonio Histórico-Artístico. En 1921 se creó en el seno de la Sociedad de Naciones la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, con el objeto de favorecer las relaciones internacionales en materia de arte, educación y creación, promoviendo la organización del I Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos, que se celebraría en la capital helena entre los días 21 y 31 de octubre de 1931, dando la luz la famosa Carta de Atenas para la restauración de los Monumentos Históricos, considerándose hoy sin ninguna duda el primer documento propiamente dicho a nivel internacional en que se defendía la configuración del Monumento Histórico-Artístico como Bien de Interés Público. *La Carta de Atenas de 1931* definió las primeras bases de la conservación de los monumentos, en un momento en que la sensibilidad pública por su conservación se fue acrecentando<sup>1648</sup>. En su artículo I ya pondrá las bases para una futura consagración del Derecho Público Internacional del Patrimonio Histórico-Artístico al señalar que la Conferencia desea que los Estados se prestasen recíprocamente su colaboración para favorecer la conservación de los monumentos históricos y artísticos; considerando que las instituciones puedan manifestar su interés por su salvaguardia. Al mismo tiempo haría hincapié en la necesidad de sensibilizar a la opinión pública mediante la educación: *La Conferencia, convencida de que la mejor garantía para la conservación de los monumentos y obras de arte reside en el respeto y en la afición de los pueblos; considerando que estos sentimientos puede ser en gran manera fomentados por una acción adecuada de los poderes públicos.* Con respecto a las divergencias de intereses entre la Propiedad Privada y el interés general del Estado, se limitaba los derechos de los propietarios y se estimulaba una coordinación de las distintas legislaciones nacionales sobre esta cuestión, al considerar el monumento como un bien público: *La Conferencia ha aprobado por unanimidad la tendencia general que afirma en esta materia un cierto derecho de la colectividad sobre la propiedad privada. La Conferencia ha comprobado que las diferencias entre las legislaciones provienen de las dificultades de conciliar el derecho público y los derechos de los particulares. En consecuencia, aprobando en todo la tendencia general de estas legislaciones, estima: que deben ser adecuadas a las circunstancias locales y al estado de la opinión pública, de manera que suscitar la menor oposición posible, haciendo ver a los propietarios los sacrificios que deben de sufrir por el interés general. La conferencia expresa el deseo de que en cada Estado*

<sup>1648</sup> Como apunta M<sup>o</sup> José Martínez, por primera vez se van a formular normas generales que todo país, estuviese o no representado en ella, deberá asumir a la hora de llevar a cabo sus restauraciones, de acuerdo con un método general, unificado en cierto sentido. Martínez, p.373.

*la autoridad pública esté investida de la facultad de tomar, en caso de urgencia, medidas para la conservación (Punto III).*

Al mismo tiempo se planteaba la defensa del llamado entorno del bien inmueble como verdadero precedente de la legislación sobre el casco antiguo y la identidad urbana que todo constructor debía de respetar: *La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben respetar algunas perspectivas particularmente pintorescas (Punto VII).* Se plantean toda una serie de instrumentos jurídicos en orden a tutelar la conservación y protección de los bienes históricos-artísticos como La publicación de un Inventario de los monumentos históricos nacionales: *Que todos los Estados (...), publiquen un inventario de los monumentos históricos nacionales, acompañados por fotografías y notas;* La confección de un Archivo Histórico: *Que cada Estado cree un Archivo donde se conserven los documentos relativos a los propios monumentos* o la difusión del Patrimonio: *Que la misma Oficina (se refiere a la Oficina Internacional de Museos) estudie la mejor difusión y el mejor uso de las indicaciones de los datos arquitectónicos, históricos y técnicos así recabados.* La Carta finaliza con un alegato a favor del valor educacional del bien histórico-artístico: *La Conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía de la conservación de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo, y considerando que este sentimiento puede ser favorecido con una acción apropiada de las instituciones públicas, emite el voto para que los educadores pongan empeño en habitar a la infancia y a la juventud (...) los induzcan al entendimiento del significado de los monumentos (Punto 10).* M<sup>a</sup> José Martínez Justicia señala como la repercusión de la Carta de Atenas fue muy amplia en toda Europa, quedando establecidos una serie de principios, entre ellos los referentes a la concepción del bien público de los bienes históricos-artísticos del Legado Patrimonial a conservar, que se irían extendiendo a las distintas legislaciones europeas del momento, como fue en el caso de la Ley española del 13 de mayo de 1931<sup>1649</sup>. Tras la Conferencia se nombraría un comité de expertos que se encargaría de preparar un Tratado Internacional para la Protección de las Obras de Arte y de Historia, que sería con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, quedando totalmente paralizado, aunque no por ello dejaría de ser el testimonio más vanguardista en el ámbito internacional sobre la configuración jurídica del Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Público.

### **- La Carta Italiana de Restauro de 1932.**

---

<sup>1649</sup> MARTINEZ JUSTICIA, M<sup>a</sup> José *Antología de textos sobre la restauración* Universidad de Jaén, 1996, p.59.

Aunque no gozó nunca de fuerza normativa cabe mencionar la Carta Italiana de la Restauración de los Monumentos Históricos de 1932, *La Carta de Restauo*, inspiradas en las teorías de restauración y conservación que había defendido Camilo Boitto o Giovannoni, aunque hubo un intento frustrado de adquirir carácter y validez normativa a través de la recepción de sus contenidos en las Instrucciones para la Restauración de los Monumentos de 1938, no tomando nunca fuerza de ley como se lamentaría posteriormente los redactores de la Carta de 1972. Sin embargo, como apunta Sánchez Mesa, su trascendencia reside en que, *por primera vez, viene afrontada la cuestión de la restauración no únicamente desde la perspectiva técnica sino también desde la competencial, afirmándose que es al Estado a quien competen las intervenciones que revisten esta naturaleza, ya sea mediante su adopción por intervención directa o mediante el control de las mismas (art.1)*<sup>1650</sup>. El fundamento jurídico de la intervención del Estado está recogido en la propia Exposición de Motivos: *Convencido de la múltiple y gravísima responsabilidad que toda obra de restauración implica (éste o no acompañada de restauración) al asegurar la estabilidad de los elementos debilitados; al poner las manos sobre un conjunto de documentos históricos y artísticos traducidos en piedra, no menos preciosos que aquellos que se conservan en los museos y en los archivos; al permitir estudios anatómicos que puedan tener como resultado nuevas e imprevistas determinaciones en la historia del arte y de la construcción; por esto, convencido de que ninguna razón de prisa, de utilidad práctica, de susceptibilidad personal pueda imponer en este tema manifestaciones que no sean perfectas, que no tengan un control continuo y seguro, que no correspondan a una unidad de criterios bien afirmada, y estableciendo como evidente que tales principios se deben de aplicar tanto a la restauración realizada por los particulares como a la de los entes públicos (...)*<sup>1651</sup>. El articulado en sí pondría las bases primordiales de los principios informadores de toda intervención en el patrimonio inmobiliario, especialmente centrándose en cuestiones técnicas.

#### **- La Carta Atena de Urbanismo de 1933.**

Al mismo tiempo fueron surgiendo una serie de normativa internacional entre países iberoamericanos sobre protección y conservación del patrimonio, donde se insertaba nuevamente el régimen de propiedad y la tutela de los bienes que componen el legado patrimonial. Edwin Harvey señala como desde principio del siglo XX fue configurándose una acción panamericana sobre protección del Patrimonio Histórico-Artístico, celebrándose nueve Conferencias Panamericanas ente 1898 y 1948, donde se fue configurando la concepción jurídica del Monumento Nacional como referente. La más importante de las conferencias fue la séptima, celebrada en Montevideo, entre el 3 y el 26 de diciembre de 1933, aprobándose tres resoluciones

<sup>1650</sup> SANCHEZ-MESA MARTINEZ, Leonardo J. “La restauración inmobiliaria en la regulación del patrimonio histórico”. Rue y Monografía. *Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación*. Thomson/Aranzadi, n.10, pp.126-127.

<sup>1651</sup> MARTINEZ JUSTICIA, M<sup>a</sup> José, 1996, p.163.

fundamentales en la consagración de un Derecho Público del Patrimonio Histórico-Artístico: Resolución XII sobre Investigaciones Arqueológicas, la Resolución XIII sobre Monumentos Inmuebles y la XIV sobre protección de Monumentos Muebles. Se ampliaba el horizonte seleccionador al considerarse Patrimonio no solamente los bienes procedentes de la época precolombina y colonial, sino también los objetos vinculados con la lucha por la independencia y con el periodo inicial de la organización de las Repúblicas.

En el año 1935 se aprobaron en el seno de la organización regional Unión Internacional de Repúblicas Americanas, inmediato antecesor de la O.E.A, dos tratados referentes a la protección del Patrimonio Histórico-Artístico. El primero fue el *Tratado sobre la protección de muebles de valor histórico OEA/Ser. A/53 (CEPF) N° 28*, que entrará en vigor el 1° de mayo de 1936, solo ratificado por el Salvador, Guatemala, México y Nicaragua, con la reserva de Chile, ya que las disposiciones del artículo 4° fue considerado contrario a la Constitución. El Convenio, de 13 artículos, establecía medidas de protección y conservación de los bienes muebles precolombinos, coloniales y de la época de la emancipación que existían en los países signatarios, con un valor histórico o artístico. En el artículo 4° se limitaba el derecho de la propiedad de los poseedores de algunos de los bienes declarados muebles en el país de origen de los mismos, reconociendo sólo el goce del usufructo y la transmisibilidad de los mismos dentro del país<sup>1652</sup>. En 1935 el camino de la protección internacional de los bienes culturales tendría un paso más con la firma del Tratado para la protección de instituciones artísticas y científicas y monumentos históricos (*Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments*), conocido como Pacto Roerich, cuyo ámbito de aplicación se reducía a los países americanos, entre ellos USA, por lo que se establecía que los monumentos históricos, los museos y las instituciones artísticas y culturales debían ser considerados neutrales, por lo que las potencias beligerantes debían protegerlas (art.1). Se rompe la concepción patrimonialista del Patrimonio Monumental, al considerarlo como un bien universal, más allá de la concepción simple nacionalista. En su artículo II se puntualizaba que *la neutralidad y respeto debido a los monumentos e instituciones serán reconocidos en la totalidad de extensión de los territorios sujetos a soberanía de cada uno de los estados signatarios y concordantes, sin ninguna discriminación con respeto y lealtad de cada Estado para con todos los monumentos históricos, museos, instituciones. Los respectivos gobiernos concuerdan en adoptar las medidas de legislación internas necesarias para asegurar la protección y el respeto*. En la notificación del pacto, Nicholas K Roerich en presencia de Roosevelt y los representantes de los países latinoamericanos afirmó que la cultura no pertenece a un solo hombre o a un

---

<sup>1652</sup> CASTELLI, María Erminia *Protección jurídica del Patrimonio Cultural de la Humanidad*, Buenos Aires, Bias, 1987, p.123.



grupo o a una nación, es propiedad mutua de toda la humanidad y herencia de las generacionesl.

#### **4. Las peculiaridades del régimen tutelar del patrimonio monumental en el seno de los derechos patrimoniales en la España liberal.**

##### **4.1. La ambigüedad del Patrimonio Monumental en el ordenamiento español.**

La imprecisión del término del Patrimonio Monumental como bien público. La definición de obra de arte u objeto de arte no está resuelta en nuestro ordenamiento jurídico ni en la propia doctrina, a pesar de la frecuencia con que se utiliza tal término en el ámbito jurídico, debido al carácter impreciso con que el legislador ha utilizado la larga lista de conceptos jurídicos, que no han permitido fijar de forma clara y precisa que se debe entender por obra de arte<sup>1653</sup>. Probablemente su naturaleza cambiante vendría a indicar F. de Azúa *de lo que en cada momento una determinada sociedad considera como obra de arte es la razón por la que el legislador de los distintos países ha utilizado la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, que a pesar de no ser la fórmula más eficaz para aportar seguridad jurídica al sistema, permite que el Derecho se vaya adaptando en cada momento a lo que la sociedad considera como arte*<sup>1654</sup>. Una simple lectura de la terminología legal utilizada en el ordenamiento español durante la etapa liberal nos llevaría a pensar que no existió en ningún momento una delimitación conceptual precisa en el ordenamiento español, reflejo de una falta de concreción a la hora de abordar el concepto del patrimonio de manera unívoca. En la Real Cédula de 1803 se menciona con el término tesoro artístico de la Nación, en la Real Orden de 1901, tesoro artístico de la Nación, en la Ley de 7 de julio de 1911, de antigüedades, en la Ley de Monumentos de 4 de marzo de 1915, monumentos arquitectónicos-artísticos, en el Real Decreto de 9 de enero de 1923, obras históricas, artísticas y arqueológicas y en el Decreto-Ley de agosto de 1926, riqueza histórico artística nacional. Sería posteriormente en la Constitución Republicana en su artículo 45 cuando se inserta el término tesoro cultural como novedad jurídica que abriría el camino al concepto uniformado del de bien cultural utilizado posteriormente a finales del siglo XX<sup>1655</sup>. Sin embargo, una nueva relectura nos puede permitir apreciar una larga gestación del término jurídico en el ordenamiento jurídico liberal en el ámbito español, por el que se fue perfilando un verdadero concepto que diera una verdadera identidad al bien que se quería proteger. El uso de las distintas acepciones gramaticales a la hora de designar la identidad de estos

<sup>1653</sup> PEÑUELAS I REIXACH, Lluís Definición de obra u objeto de arte en PEÑUELAS I REIXACH (ed.), 2008, pp.382-383. De la bibliografía internacional cita dos obras referente a esta concepción DUBOFF, L.D. *What Is Art-Toward a Legal Definition*, 12 Hastings Comm.& Ent. L.J., 1989-1990, pp.303 y ss. y KEARS, P. *The legal concept of art*, Hart Publishing, Oxford, 1998.

<sup>1654</sup> F. de AZÚA, *Diccionario de las artes*, Planeta, Barcelona, 1995, p.237.

<sup>1655</sup> PRIETO DE PEDRO, Jesús, 1991, p.1151.



bienes no eran sino puro reflejo de contraposiciones que más bien pertenecerían al campo de lo metajurídico, siendo los epítetos de histórico y artístico lo que prevalecería sobre otros enunciados que se utilizarían en el ordenamiento jurídico decimonónico español. En la misma línea estaría la tesis de Prieto de Pedro a la hora de explicar la configuración terminológica del bien histórico-artístico, del que recogemos algunas afirmaciones: *Es verdad que (...) la terminología legal no ha mantenido un criterio uniforme a la hora de adjetivar los intereses protegidos, pues se ha hablado sucesivamente de monumentos antiguos, de antigüedades, de monumentos arquitectónicos-artísticos, de monumentos artísticos-arqueológicos, históricos-arqueológicos, histórico-artísticos y arquitectónico-artísticos. Pero, no obstante, es un hecho innegable que en la legislación del presente siglo y, sobre todo a partir de la tercera década, han sido los adjetivos histórico y artístico los de uso dominante, acompañados también, en algunas ocasiones, por el adjetivo arqueológico. Pues bien de la lectura detenida de esta legislación se deduce la existencia de un proceso gradual e ininterrumpido de lo concreto a lo abstracto en la construcción del concepto, en el que los objetivos histórico y artístico – y sobre todo lexicados en la forma compuesta histórico-artístico- asumen, en tanto no llegó a asentarse en el lenguaje legal el adjetivo cultural, la función de categorías abiertas que expresan el universo total de los valores en ese tiempo comprendidos dentro de dicho patrimonio (es decir, además de los strictu sensu históricos y artísticos, los arqueológicos, paleontológicos, arquitectónicos (...))<sup>1656</sup>.*

Sin embargo, en el ámbito del ordenamiento español, se asistirá a un hecho trascendental para la evolución terminológica del concepto, que ha sido la asimilación del término cultural de manera imprecisa en el ámbito contemporáneo como superación de los ordenamientos liberales, que si ocurriría en el caso de la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos, ya que en el artículo 46 de la Constitución española de 1978 todavía se utilizaría los conceptos patrimonio cultural, artístico y monumental con el mismo contenido semántico, actualmente superado tanto en el ámbito metajurídico como en el terreno legal. Así lo afirma Prieto de Pedro cuando precisa que *la locución patrimonio cultural es fruto de un cambio lento y profundo en el lenguaje jurídico hacia una concepción más extensa (...) Mientras que los intereses históricos-artísticos que en una etapa larga pugnaron por cumplir esa función unificadora resumiendo los dos valores fundamentales de este patrimonio, vienen ahora a decaer en ese papel, retomando la función cuasi-tipológica de sus orígenes (...) por lo que no podemos empero hacer una valoración igual de favorable sobre la forma con que la Constitución emplea los adjetivos histórico, cultural y artístico en el artículo 46 por lo que es menos novedoso de lo que se cree en nuestro derecho, al ya aparecer en el constitucionalismo de 1931.*

<b>LEGISLACION</b>	<b>CONCEPTO JURIDICO</b>	<b>BIENES CONFIGURAN</b>	<b>QUE EL</b>
--------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------

---

<sup>1656</sup> PRIETO DE PEDRO, Jesús, 1991, pp.1556-1559.

		PATRIMONIO
Real Cédula de 1803	Monumentos Antiguos	
Real Orden de 1901	Tesoro artístico de la nación	
Ley de 7 de julio de 1911	Antigüedades	
Ley de 4 de marzo de 1915	Monumentos arquitectónicos-artísticos	
Real Decreto de 9 de enero de 1923	Obras Históricas, artísticas y arqueológicas	
Decreto-ley de 9 de agosto de 1926	Riqueza histórica artística nacional.	

Sin embargo, el problema no es tanto en el ámbito de la terminología utilizada sino en la propia delimitación jurídica mediante un acto de declaración formal de tintes claramente administrativos, al declarar un bien de interés histórico-artístico como Monumento Histórico-Artístico. *¿A que se denomina Monumento en la legislación española? La exaltación de la identidad nacional va a producir sin duda una concienciación del Patrimonio Monumental, pero limitada al Valor Ideológico de donde van a beber todo el conjunto de Los bienes que configuran el patrimonio Monumental en la España Liberal. Lo nacional va a llevar a una selección patrimonial que va a proyectarse en una selección patrimonial Los bienes que configuran el Legado Patrimonial de titularidad pública no cambian en cierta forma con el resto de países del ordenamiento liberal. Son bienes heterogéneos, de no fácil distinción valorativa, que van siendo introducidos en función de los intereses que el Estado ha ido marcando en base a una fundamentación ideológica de tintes claramente nacionalistas. Y es que la lectura esteticista de la mayor parte de estos bienes se entremezcla con el llamado interés nacional del Legado Patrimonial. La conciencia pública de la existencia de un Legado Patrimonial ya habría surgido desde la etapa de los Austrias, intensificándose con los Borbones, pero no cabe duda que los expolios napoleónicos y las pérdidas que supusieron las distintas medidas desamortizadoras hicieron revalorizar unos bienes que en cierta manera legitimaban más que a la identidad nacional como Pueblo lo hacía con la Corona, e incluso la propia institución eclesiástica, que acaparaba la mayor parte de los bienes históricos-artísticos. Con el desarrollo del Estado Liberal a partir de la Regencia de María Cristina, y especialmente en el periodo isabelino y en la Restauración se reafirma la identidad nacional como pueblo homogéneo de peculiaridades étnicas y culturales propias que lo diferencia de los restos de los países europeos, proyectado especialmente en los propios bienes del pasado, que enlaza con las raíces que lo definieron como pueblo, por lo que se va ampliando el conjunto de los bienes a proteger. La crisis de la identidad nacional a finales del siglo XIX abre el camino a una nueva concepción del hecho hispano y por consiguiente a una relectura del Patrimonio Monumental en la España Liberal.*

No cabe duda que la irrupción de la historiografía artística en el ámbito hispano va a ir abriendo paso a una científicación del hecho patrimonial, que fue superando su simple lectura esteticista, pero que desgraciadamente quedaba en unos pocos círculos de eruditos (desde el mundo académico hasta las propias instituciones privadas que fueron apareciendo en esta etapa), por lo que el Estado promovía más un modelo ideológico de tintes nacionalistas en las capas sociales que fueron accediendo al conocimiento del Patrimonio Monumental, especialmente entre la clase burguesa, por lo que supuso la reivindicación por parte de las elites locales de todos aquellos bienes que considerara vital para su identificación con la identidad nacional, que a su vez legitimaba el aparato político-administrativo que sustentaba su poder. De esta manera el Estado se propondría salvar todas aquellas manifestaciones que bebieran en las raíces de su historia, por lo que lo mismo promovería excavaciones arqueológicas (como fueron el caso de Numancia, Itálica o Mérida), adquiriría colecciones de pinturas y esculturas para formar museos nacionales, aunque carente en muchos casos de un sentido homogéneo más allá de lo puramente ideológico.

	Valores del Patrimonio Monumental	Bienes que configuran el Patrimonio Monumental.
<b>Estado Absolutista</b>	Exaltación de la Monarquía Hispana.	Patrimonio Arquitectónico (Barroco, Neoclásico). Bienes de Artes Plásticas (Barroco). Patrimonio Arqueológico (Patrimonio Romano)
<b>Estado Liberal</b>	Exaltación de la Identidad Nacional	Patrimonio Arquitectónico (Arte Medieval, Islámico) Bienes de Artes Plásticas (Barroco). Patrimonio Arqueológico (Patrimonio Romano). Patrimonio Urbano Monumental
<b>Crisis del Estado Liberal</b>	Crisis de la Exaltación de la Identidad Nacional	Patrimonio Arquitectónico Bienes de Artes Plásticas

### *- Del Patrimonio Arquitectónico al Patrimonio Urbano Monumental.*

Bienes de Artes Plásticas (esculturas y pinturas). Durante el periodo liberal la escultura y la pintura fue adquiriendo una identidad propia, más allá de los círculos selectivos de la Monarquía o de la aristocracia, identificado más como una exaltación de sus linajes que del propio gusto estético, que en esta línea va a ser sustituida por las familias burguesas. La existencia de un verdadero interés tutelar en el ámbito hispano se inserta en las raíces del propio coleccionismo español, especialmente en el coleccionismo de pinturas y esculturas que desde la Casa Real hasta las distintas familias nobiliarias

irrumper desde la época del Renacimiento, aunque cabe delimitar no solamente un interés puramente estético, sino que va a ir jalonándose un fundamento de claro matiz ideológico. A partir del siglo XIX, la burguesía española va heredar los hábitos coleccionistas de las antiguas clases estamentales, teniendo la pintura barroca, especialmente las composiciones de Murillo y sus discípulos las más adquiridas por el mercado. No cabe duda que en estos años la pintura de la historia, el costumbrismo o el realismo se abrieron paso a los gustos estéticos de la burguesía conservadora, pero aunque era obras cotizadas en los mercados de referencias, un gran número de ellas habían sido realizadas por pintores vivos, por lo que fueron exceptuados del Legado Patrimonial, que se convertiría en una causa primordial de la pérdida de muchas de estas piezas al ser vendidas fuera de nuestras fronteras. No cabe duda que el gusto estético referente a los bienes muebles plásticos va a cambiar a lo largo de este periodo, aunque siempre con algunos matices diferenciadores del resto del panorama europeo. Carlos Reyero ha dividido en dos grandes fases la evolución de la producción artística, poniendo como barrera cronológica los años ochenta del siglo XIX, distinguiendo una primera etapa que correspondería los últimos bastiones del neoclasicismo y la irrupción del romanticismo, especialmente con la amplia producción del cuadro de costumbre, que será muy apreciado por el coleccionismo extranjero; la pintura realista y el desarrollo de la pintura de la historia, y una segunda etapa donde marca la llegada de las vanguardias artísticas, que son reinterpretadas como manifestaciones artísticas de carácter permeables que se reciben y reinterpretan de manera peculiar en el caso español<sup>1657</sup>.

#### **- Patrimonio Arqueológico.**

Durante la etapa liberal el Patrimonio Arqueológico va a experimentar un tratamiento peculiar en su tutela jurídica, a pesar de que la Arqueología Científica como tal no va a irrumpir hasta los últimos decenios del siglo XIX<sup>1658</sup>. Los antecedentes de la arqueología como disciplina científica en España lo podríamos situar entre los siglos XVI y finales del XVIII, en el que empieza a desarrollar la epigrafía, la numismática y algunos bienes inmuebles. Son estudios cuya denominación no sería científica, sino más bien anticuaria. Como apuntan Gloria Mora y Mariano Ayarzagüena *varios son los motivos que originaron este interés por el pasado, siempre interrelacionados: el afán de coleccionismo por cuestiones de prestigio o por pura casualidad científica, el deseo de elaborar una historia de España desde la más remota antigüedad, la necesidad de encontrar en el pasado argumentos para explicar, justificar o legitimar asuntos del presente por parte de las más altas autoridades eclesiásticas o incluso de la propia*

<sup>1657</sup> REYERO, Carlos; FREIXA, Mireia *Pintura y escultura en España, 1800-1910*. Madrid, Cátedra, 1995.

<sup>1658</sup> BELTRAN, José Historia de la Arqueología en España. Precedentes y líneas actuales de investigación, *Revista de Historiografía*, 1, Madrid, 2004, pp.38-59.

*monarquía (...).*<sup>1659</sup>. No cabe duda que con el precedente ilustrado bajo los auspicios de la monarquía borbónica se fue despertando un interés por el llamado patrimonio arqueológico, que alcanzaría su cenit con el sentimiento nacionalista propio del Estado Liberal, por lo que apunta Gloria Mora *desde los primeros años del siglo XVII, la monarquía ilustrada impulsó un cambio notable en el tratamiento de las antigüedades. Los Borbones promovieron los estudios anticuarios, financiaron viajes arqueológicos por España y por Italia y campañas de excavación en diversos lugares, bajo la supervisión de las nuevas instituciones de fundación real: La Real Academia de la Historia y la Real Academia de Nobles Arte de San Fernando.*

Durante la segunda mitad del siglo XIX se va a ir perfilando una institucionalización administrativa por lo que la Arqueología va a ir adquiriendo una identidad propia, por lo que las llamadas Comisiones Provinciales de Monumentos cumplirán un papel trascendental en la tutela del Legado Patrimonial, al mismo tiempo que se convertiría en parte esencial de la construcción ideológica del nacionalismo español que iba definiéndose a lo largo del periodo, por lo que estábamos asistiendo *a una manifestación profunda del valor y función de las antigüedades arqueológicas, a propósito de las cuales se van a ir quedando relegadas a un segundo plano las consideraciones basadas en su ajuste o no a cánones formales de belleza, para incidir en los aspectos referentes a su contenido. Con ello, quedaban dotadas de un indudable valor como instrumentos de transmisión ideológica en el esfuerzo de consolidación de una cultura nacional*<sup>1660</sup>. Al convertirse las antigüedades como pilar importante en el campo de la configuración de la identidad nacional, va a ir paulatinamente surgiendo una arqueología científica que se va proyectar en distintos planos tanto técnicos como educativos, por lo que se empieza a planificar las primeras excavaciones arqueológicas de manera sistematizada, con la aparición de una amplia red de instituciones, desde la creación de una amplia red de museos arqueológicos, hasta la aparición de Escuela Superior de Diplomática de 1856, que se encargará de formar los funcionarios que se iban a dedicar a la recuperación y custodia de las antigüedades, a lo que se uniría a partir de 1858, el Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y, desde 1867, de Anticuarios (de Arqueólogos desde 1901), que se encargarían de organizar los museos nacionales, e incluso la incorporación de esta disciplina en distintos niveles educativos (desde los liceos y ateneos a la Escuela Superior de Diplomática, creada por Real Decreto de 7 de octubre de 1856, siendo sustituida a principio del siglo XX en los estudios universitarios). Las abundantes publicaciones científicas que van a difundir el conocimiento de las excavaciones

---

<sup>1659</sup>DÍAZ-ANDREU, Margarita La arqueología en España. Historia de una disciplina, en *Teoría e Historia de la Restauración*, 1997, pp.220-233.

<sup>1660</sup>RIVIERE GOMEZ, Aurora Arqueólogos y Arqueología en el proceso de construcción del Estado-nacional español (1834-1868), en la cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España, Universidad de Málaga, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997, p.135.

arqueológicas practicadas por un amplio sector de la población; el gran número de excavaciones y descubrimientos de nuevas culturas materiales (como fue el caso de la cultura ibera o la pintura rupestre) que abrieron nuevos aires al conocimiento histórico del pasado hispánico<sup>1661</sup>.

En el último tercio del siglo van a ir situándose un grupo de arqueólogos extranjeros como fueron los alemanes Emil Hübner y Adolf Shulten; los belgas Henri y Louis Siret o el inglés Jorge Bonsor, por lo que se puede considerar en este momento a nuestro país como una verdadera colonia arqueológica, al igual que se había ido produciendo en amplios espacios de Asia Oriental, que impulsarían los estudios de amplios campos vírgenes para la arqueología especialmente en el ámbito de la Prehistoria y el arte rupestre, en el mundo ibérico y en el de la epigrafía, introduciendo un nuevo modelo de investigación científica, que se convertirían en el aliciente a principio del siglo XX para la creación de una serie de instituciones de ámbito nacional con el objeto de ampliar los estudios científicos sobre la Prehistoria, entre los que se encontraría la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (antecedente del CSIC). Los avances de esta etapa darían su fruto: *profesionales bien formados en centros de extranjeros (especialmente en Alemania), excavaciones sistemáticas planificadas y publicadas, renovación y fomento de los museos, introducción de la Arqueología y la Prehistoria como disciplinas de los planes de estudio de la Universidad española, proliferación de revistas especializadas y de publicaciones monográficas. Todo ello redundará en el gran impulso que se observa en la Arqueología que se desarrolla en España entre el fin de la I Guerra Mundial y nuestra Guerra Civil*<sup>1662</sup>. A lo largo de este recorrido evolutivo de la arqueología española van a producirse al mismo tiempo dos hechos trascendentales que debemos de tener en cuenta. Un primer punto de referencia sería la consolidación de una conciencia patrimonial de los bienes arqueológicos que va a culminar en un verdadero proceso de judicialización por el que se convierte en un autentico bien jurídico en los distintos sistemas normativos que van a ir desarrollando a lo largo de este periodo, que tendrá como culminación una legislación específica a comienzo del siglo XX, concretamente la famosa Ley de 1911 y su Reglamento de 1912. De esta manera los bienes arqueológicos van a ir tomando una identidad jurídicamente hablando, y van a ir a nivelando su impronta con el tradición legado patrimonial que hasta este momento había representando los bienes inmuebles de valor histórico y artístico y las colecciones pictóricas. Una segunda será como consecuencia de lo anterior, al producirse un verdadero expolio de bienes arqueológicos, intensificado por un mercado fraudulento, que va a suponer una importante pérdida irrecuperable, no solamente con el saqueo de los bienes muebles sino incluso con la destrucción de un gran número de yacimientos

<sup>1661</sup> Un interesante resumen de la arqueología española en el siglo XIX BERLANGA PALOMO, M<sup>a</sup> José *Arqueología y erudición en Málaga durante el siglo XIX*, Servicio de Publicaciones. Universidad de Málaga, 2005, pp.15-45.

<sup>1662</sup> MORA, Gloria; AYARZAGÜENA, Mariano, p.14.



arqueológicos, lo que va a provocar una respuesta institucional que va a ir delimitando una protección especial que se traducirá en la construcción jurídica del Bien Arqueológico como Dominio Público, construcción que se hará muy lenta y que habría que esperar prácticamente hasta nuestros días, pero que no cabe la menor duda de que durante el Estado Liberal se va poner la base jurídica para ello.

#### **- Patrimonio Documental.**

La construcción de un verdadero interés general del Patrimonio Monumental en base a un discurso nacionalista estimulado por el propio Estado dio lugar a la elaboración jurídica del Documento como bien público recogido por los distintos sistemas normativos que fueron apareciendo a lo largo del proceso liberal español.

#### **4.1.2. El Interés Nacional como fundamento jurídico de la intervención estatal en el ámbito del derecho privado.**

La lenta configuración del Estado Liberal en nuestro país a lo largo del siglo XIX supuso la aparición de un Patrimonio de Identidad de exaltación nacional bajo los auspicios de una incipiente burguesía que fiel a sus intereses fue elaborando una valoración y selección patrimonial que se hundiera en las propias raíces históricas que diera legitimidad al nuevo ente político, la Nación, que sustituyera a la Monarquía Absolutista que había representado los regímenes de los Austrias y los Borbones. ¿Qué es el Valor Nacional? Lo nacional fundamenta lo burgués, llena su cultura, el sentido de la vida social, sus propias relaciones, e incluso la supervivencia como estamento en momentos de crisis políticas y sociales. Como apunta Alvarez Junco se va a dar un esfuerzo liberal por la construcción cultural de la nación, cuyo proceso queda sintetizado en los siguientes términos: *La concepción de España como nación, en el sentido moderno de este término, fue tarea de las primeras generaciones liberales, necesitadas de esta idea para la nueva legitimación del poder que, bajo el nombre de soberanía nacional, oponían al monarca absoluto. En sus líneas fundamentales, las élites políticas habían completado el proceso de reconstrucción de la cultura en términos nacionales cuando, al iniciarse el último cuarto del siglo XIX, se produjo la restauración de la Monarquía Borbónica*<sup>1663</sup>.

Sin embargo lo nacional como identidad irrumpe en el escenario hispano con una serie de caracteres específicos que lo va a diferenciar del resto de la cultura europea<sup>1664</sup>:

---

<sup>1663</sup> ALVAREZ JUNCO, José *La conformación de una identidad en Historia de España* Menéndez Pidal, Tomo XXXVI, Madrid, 2002, p.5.

<sup>1664</sup> La identidad nacional española ha sido motivo de debate historiográfico no resuelto todavía en la actualidad, por lo que ALVAREZ JUNCO, José *Identidad heredada y construcción nacional. El caso español del Antiguo Régimen a la revolución liberal*, *Historia y Política*, 1, 1999; FUSI, Juan *España. Evolución de la identidad nacional*, Madrid, Temas de Hoy, 2000.

1º) La cultura nacional del liberalismo español no supone una total ruptura con su pasado histórico, con el hecho cultural del Antiguo Régimen, sino que por el contrario en los periodos mas conservadores de la España Liberal (desde los moderados a la restauración) se van a intensificar un proceso de solidificación de la cultura tradicional española basada en la reafirmación del hecho religioso católico y en la hegemonía de la hispanidad como elementos integrantes de la identidad nacional<sup>1665</sup>. Al mismo tiempo se define un nacionalismo que exalta los hechos históricos de la Monarquía Hispana (desde la Reconquista hasta las hazañas bélicas del periodo de los Austrias)<sup>1666</sup>.

2º) El nacionalismo español no solamente impregna a la burguesía como clase dominante en el sistema político y social de la España Liberal, sino que al mismo tiempo se expande las clases sociales menos pudientes, insertándose en las propias raíces de su identidad. Y es que desde muchos sectores de la historiografía se pone en entredicho la existencia de una verdadera clase burguesa en España hasta bien entrado el siglo XIX, lo que provocó que no surgiera una autentica cultura nacional identificada con lo puramente burgués, como en el caso de otros ámbitos culturales europeos<sup>1667</sup>. La llamada revolución burguesa es abordada por el profesor Clavero, quien defendería que la verdadera revolución fue la que se produciría con la promulgación de la legislación que abolía el régimen señorial, por lo que la revolución social sería consecuencia directa de la revolución jurídica<sup>1668</sup>. Mariano Peset es tajante al afirmar *que es posible que no sea tan profunda como en Francia, pero, al transigir con la nobleza y realizar el cambio, indica su potencia. La vía española es menos intensa que la francesa, pero incomparablemente más*

<sup>1665</sup> Es interesante resaltar la impronta del dualismo catolicismo-nacionalismo en la configuración de la identidad española. En palabras de Alvarez Junco era *la unidad de creencias o unidad moral de los españoles lo que importaba, mucho más que la unidad o la fortaleza del Estado*. ALVAREZ JUNCO, p.431.

<sup>1666</sup> La identificación de lo español con la Monarquía Hispana va a jugar primordial en la fundamentación ideológica del propio poder monárquico.

<sup>1667</sup> Una de los más importantes debates de la historiografía hispana lo constituye la existencia o no en nuestro país de una verdadera revolución burguesa, y los caracteres sociales adscritos a la misma. Sería imposible en este estudio recoger la amplia producción bibliográfica sobre el tema en cuestión, por lo que he recogido algunas obras que abordan con profundidad dicha cuestión: PÉREZ GARZON, J.S. La revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-1979, en TUÑÓN DE LARA, M. *Historiografía española contemporánea. X Coloquio de Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad de Pau. Balance y Resumen*. Madrid, 1980, pp.91-138; ALVAREZ JUNCO, J. A vueltas con la revolución burguesa, en *Zona Abierta*, nums. 36-37, 1985, pp.81-106; PIQUERAS, J.A. La revolución burguesa española. De la burguesía sin revolución a la revolución sin burguesía, en *Historia Social*, 24, 1996, pp.95-132; TUÑÓN DE LARA, M. *La España del siglo XIX español*, Akal. Madrid, 2000; ARTOLA, *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*, Alianza Editorial, Madrid, 1973; FONTANA, J. La burguesía española entre la reforma y la revolución en Varios Autores, *Revueltas y revoluciones en la Historia*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, p.131.

<sup>1668</sup> CLAVERO, B. Para un concepto de la revolución burguesa, en *Sistema*, 13, 1976, pp.35-54 y CLAVERO, B., RUIZ TORRES, P. y HERNANDEZ MONTALBAN, FJ. *Estudios sobre la revolución burguesa en España*, Siglo XXI, Madrid, 1979.

*avanzada que la prusiana...*<sup>1669</sup> Queda subrayar el testimonio de Francisco Tomas y Valiente quien llegó a afirmar *que parece indudable que en España sí que hubo revolución burguesa, si bien ésta se llevo a cabo no según las pautas del modelo francés, ni tampoco obedeciendo a los criterios y normas de un supuesto tipo ideal de revolución francesa, sino tal y como lo permitieron las reales y peculiares características de la sociedad española*<sup>1670</sup>. El carácter conservador de la burguesía española aparece reflejada en las palabras de Aquilino Iglesias: *Las dudas sobre esa revolución burguesa española parecen proceder de la debilidad de la burguesía a comienzos del siglo XIX, pero pese a ello puede plantearse la existencia de una revolución burguesa en España, ya que la burguesía salió fortalecida del mismo proceso revolucionario termina por convertirse en una clase conservadora.*<sup>1671</sup>

3º) La existencia de los nacionalismos periféricos (especialmente el caso catalán, vasco y gallego) va a provocar una reacción desde el Estado Centralista de la promoción de una cultura nacional española, lo que va a suponer unas controversias entre sectores territoriales de la Península Ibérica, que van a ir más allá de lo puramente político, quebrantando las políticas homogeneizadoras que desde la llegada de los Borbones se habían producido en nuestro país, surgiendo la España Invertebrada que Ortega y Gasset enunciaría años posteriores.

4º) La reacción de todo lo foráneo, concretamente de lo europeo, intensifica aun más la identidad nacional, en un momento en que el país estaba viviendo una situación de aislamiento internacional que nos va a llevar a la pérdida de las posesiones de ultramar, hecho que alimenta aun más la construcción de barreras que impide todo aire nuevo del exterior, por lo que se va forjando la España Negra descrita por Gutiérrez Solana.



---

<sup>1669</sup> PESET, Mariano Propiedad y crédito agrario, en PETIT, Carlos *Derecho Privado y Revolución Burguesa*, Monografías Jurídicas. Marcial Pons, Madrid, 1990, p.173.

<sup>1670</sup> TOMAS Y VALIENTE, F. *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid, Tecnos, 2010, pp.404-405.

<sup>1671</sup> IGLESIAS FERREIRÓS, Aquilino, El código civil (Español) y el (llamado) Derecho foral gallego en PETIT, Carlos *Derecho Privado y Revolución Burguesa*, Monografías Jurídicas. Marcial Pons, Madrid, 1990, p.277.

La identidad nacional como fundamento ideológico va a proyectarse tanto en los valores estéticos como históricos del Legado Patrimonial. Al igual que ocurrió en otros países liberales se va a ir fraguando desde el Estado un programa de dirección cultural en orden a formar a los ciudadanos que forman parte de la comunidad política a la que pertenecen. La búsqueda de unas raíces pretéritas, aunque en algunos momentos, de manera artificial que diera consistencia a la idea de una nación como personalidad propia iría a dar como resultado un replanteamiento de los valores estéticos en el ámbito de la producción estética, especialmente con la exaltación del arte medieval, incentivándose toda un programa de rehabilitación de todo tipo de bienes inmuebles, unido a la búsqueda de un verdadero estilo nacional basado en los gustos estéticos historicistas. Lo histórico se va a regular en España al mismo tiempo que lo estético como un valor primordial de todo bien que forme parte del Legado Patrimonial. En muchas ocasiones se crea una artificialidad en torno a lo antiguo, por lo que se insta desde el Estado una verdadera escuela nacionalista de historiografía, e incluso se busca todo tipo de documentación que le de como resultado un verdadero testimonio del pasado.

	<b>La construcción de la identidad nacional en la etapa liberal</b>	<b>La construcción de la clase burguesa española en la etapa liberal.</b>
<b>Liberalismo constitucional.</b>	Nación frente a la Monarquía Absolutista.	Incipiente burguesía revolucionaria
<b>Liberalismo isabelino</b>	Construcción inicial de la identidad nacional	Burguesía conservadora
<b>Restauración</b>	Triunfo de la identidad nacional	Burguesía conservadora

#### **4.2. La construcción jurídica del Patrimonio Monumental en el seno de los derechos patrimoniales: Un ensayo frustrado del Patrimonio Monumental como Bien de Interés Público en la España Liberal.**

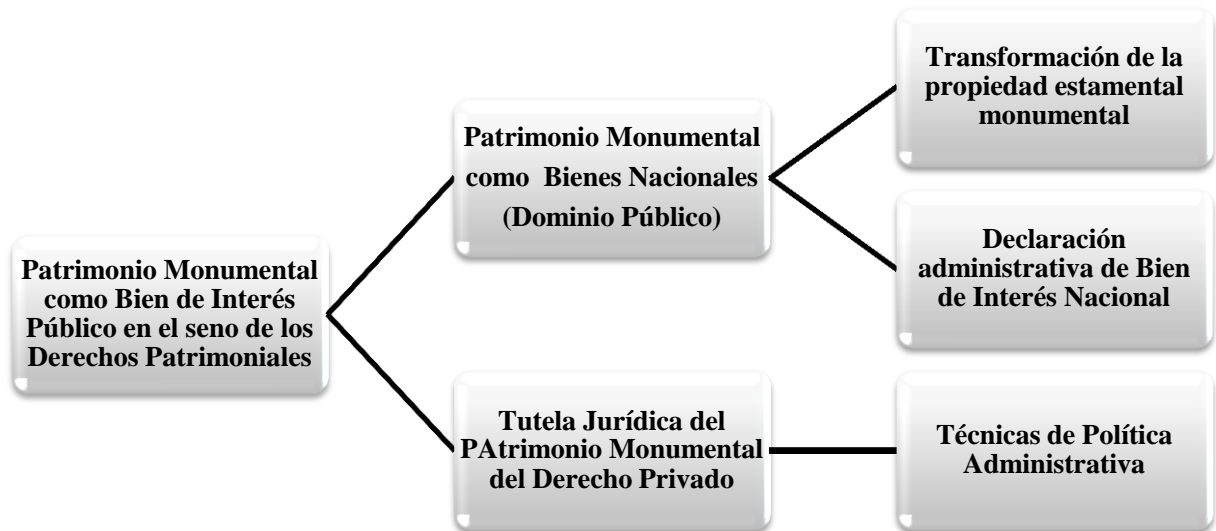
El modelo de Estado Tutelar en España al igual que en otros escenarios europeos se va a ir delimitando con el advenimiento de las políticas culturales impulsadas por la Monarquía Reformista de Fernando VI y Carlos III, aunque será ya en el periodo liberal con los reinados de Isabel II y durante la Restauración Monárquica cuando podemos definir, aunque con algunas líneas confusas en algunos aspectos, de la presencia de una política cultural a

instancia del Estado. Lo cultural en sus más variables manifestaciones comienza a servir de instrumentalización de los intereses de la burguesía, siendo el Legado Patrimonial uno de los pilares limitadores del propio régimen político. No cabe duda que podemos hablar de una auténtica frustración a la hora de configurar una verdadera política tutelar del Patrimonio Monumental ya que no se definiría una plena conceptualización del Legado Patrimonial que hubiera permitido salvar un mayor número de bienes históricos-artísticos, sino que por el contrario su selección y valoración estuvo simplificado en un mero discurso axiológico de carácter nacionalista, en lo que histórico y lo artístico como valor fundamentaban a su vez la identidad artificiosa de lo español en la incompleta construcción del Estado Liberal español.

Un punto vital en toda protección del Legado Patrimonial sería la promulgación de un sector normativo específico, que en el caso de España, a pesar de la amplia disposición normativa que se va a dar desde la etapa de los Borbones, no se llegó a contar con una verdadera ley hasta los primeros decenios del siglo XX. La ley ordinaria como fuente del derecho será primordial como instrumentalización jurídica en la protección del patrimonio histórico-artístico. El Estado va a utilizar reiteradamente a lo largo del periodo que analizamos un corpus legislativo delimitado por el Gobierno como órgano de regulación. A la hora de la promulgación de esta normativa ordinaria las instituciones privadas de carácter cultural como fueron los casos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid o la Real Academia de la Historia influirían a la hora de la promulgación de las leyes ordinarias. No podemos afirmar la existencia de un amplio corpus normativo promulgado por los órganos gubernativos del Estado si lo comparamos con el derecho patrimonial histórico-artístico de otros ámbitos europeos, como fueron los casos de Francia o de Italia, ni siquiera de una evolución clara en la conceptualización normativa que fuera definiendo una verdadera concienciación del patrimonio, sino que en muchos casos simplemente respondía a problemas inmediatos, o a una simple recepción del derecho patrimonial europeísta, que en muchas ocasiones llegaba tarde e incluso obsoleto a nuestro ámbito cultural.

Será en el seno de los derechos patrimoniales donde se va articular la verdadera esencia de una configuración del Derecho del Patrimonio Monumental, especialmente a la hora de discernir un sistema de tutela por parte del Estado. El problema radicaría en delimitar el modelo tutelar por el que el Estado pudiera intervenir en unos bienes especiales, como son los pertenecientes al Patrimonio Monumental, que muchos de ellos formaban parte de la esfera privada. Como en el resto de los sistemas liberales, el Régimen de la propiedad histórica se convierte en el fundamento jurídico de la tutela del Patrimonio Monumental, teniendo en el caso hispano como matiz diferenciador la impronta que la propiedad privada va a marcar en la configuración de un

sistema protector. Al mismo tiempo desde las teorías administrativas española siempre se han apuntado posiciones favorables a la hora de concebir al



Patrimonio Monumental como un Bien de Dominio Público.

El Estado va a ir construyendo en el seno del derecho patrimonial un Bien de Interés Público que va a diferenciar su sistema tutelar en función al régimen de propiedad en que este insertado los bienes que lo configuran, por lo que no se puede hablar de un régimen jurídico tutelar homogéneo para todos los bienes históricos-artísticos. Podemos distinguir dos tipos de bienes: Un primer grupo correspondería los Bienes Nacionales que se van a aproximar a la teoría administrativa de dominio público que se estaba insertando en el siglo XIX, y en el que se incluirían en un primer proceso revolucionario, correspondiendo a los primeros momentos de la etapa liberal, aquellos bienes históricos-artísticos que a raíz de las medidas desamortizadoras y la transformación jurídica del poder Monárquico pasan a formar parte del patrimonio del Estado (que van a ser clasificado bajo la denominación de Patrimonio Nacional), y aquellos que bajo la Declaración administrativa de Bienes de Interés Nacional, que van a ir articulándose desde la etapa de Isabel II y que llegará a finales del régimen liberal, por la que se incluirían mediante la catalogación y el inventariado una serie de bienes, en la mayor parte



inmuebles, y que en principio podíamos también considerar próximo al sistema de dominio público. Un segundo grupo de bienes formarán parte de la esfera de los particulares, por lo que en principio se van a considerar su tutela como un derecho inherente al propietario, pero que va a ir incrementando la intervención pública en el momento en que se vaya resquebrajando el carácter absoluto del derecho de la propiedad privada, en base a la configuración de un interés nacional como fundamento jurídico de la acción tutelar pública. Será la técnica de la policía administrativa la que utilice como límite del derecho de la propiedad privada, especialmente en el deber de conservación y tráfico jurídico de dichos bienes.

#### **4.2.1. Los derechos patrimoniales como eje del ordenamiento jurídico de la España Liberal: La primacía del derecho de la propiedad privada sobre el interés general en el ordenamiento jurídico liberal español.**

Durante el desarrollo del Estado Liberal se produce un hecho indiscutible en el panorama jurídico español: la preeminencia del derecho de la propiedad privada sobre los intereses generales, que llenará todo el ciclo vital de la historia de nuestro país durante el siglo XIX y se prolongará en gran medida en los distintos sectores normativos de los primeros decenios del siglo XX, con un carácter más acentuado que en otros países europeos de nuestro entorno. Los intereses privados de una burguesía nacionalista nacida en los diversos regímenes liberales de la España Liberal van a tener su traducción jurídica en la defensa de la propiedad privada como derecho absoluto, por lo que los intereses del propio Estado quedará en muchos momentos diluidos. La promulgación de los primeros ordenamientos sobre la expropiación forzosa o los propios proyectos frustrados de la reforma agraria fueron abriendo el camino de la intervención estatal y el resquebrajamiento del carácter absoluto del derecho de la propiedad privada. Sería quizás discutible afirmar que la clave del ordenamiento jurídico del Estado Liberal fue sin ninguna duda la delimitación jurídica de la propiedad privada y su conflicto con los intereses generales de una Administración que fue consolidándose a lo largo de este periodo, pero no cabe duda que gran parte de la modernidad jurídica que fue gestándose en nuestro país hasta el advenimiento de la II República fue precedido por los conflictos sociales entre propietarios privados (la nueva propiedad privada liberal frente a la propiedad estamental en un primer momento de la construcción del Estado Liberal en el ámbito hispano), entre los intereses generales del Estado y los privados (que iría ganando terreno primordialmente a raíz de la revolución de 1868), con la configuración de los bienes de interés público. Los cambios que se irían produciendo en el ámbito del derecho de la propiedad en el caso español no fueron rápidos, ni resultado de un proceso coherente y ordenado, sino que fueron surgiendo como resultado de procesos revolucionarios y de transformación del propio Estado.

#### 4.2.1.1. La consagración del derecho de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico de la España Liberal.

La historiografía jurídica ha resaltado como uno de los componentes básicos de los distintos ordenamientos jurídicos promulgados en España durante la etapa liberal ha sido el derecho de la propiedad privada. Tomás y Valiente destacaría como la burguesía ascendente se dotó de un instrumento eficacísimo para transformar el orden socio-económico del Antiguo Régimen<sup>1672</sup>. Artola expresa con gran claridad la impronta que va a suponer el derecho de la propiedad privada en el ámbito de la sociedad liberal: *La propiedad es, por tanto, un indicador objetivo del grado de felicidad alcanzado por una persona (...) Sola la propiedad que es a la vez individual y libre quedó bajo la protección de las leyes y toda forma de propiedad que no se ajustase a esta definición debía de convertirse en ella. No cumplían esta condición las propiedades vinculadas de los nobles. Aunque en cada momento existía un único propietario el titular del mayorazgo no tenía capacidad de disponer de él a su muerte y no podía tampoco enajenarlo. La propiedad colectiva de las personas morales –La Iglesia, el municipio o el propio Estado– no cumplía con la primera de las condiciones. Todos estos bienes debían, por tanto, incorporarse al mercado. Los bienes vinculados se convirtieron en libres en manos de sus poseedores, en tanto la propiedad de las personas morales acabó en manos de los particulares, a través de un proceso en dos etapas: nacionalización y enajenación*<sup>1673</sup>. Siguiendo a Vicente L. Montes *la propiedad se entiende ante todo, como una situación activa, de poder: un derecho subjetivo, y, acaso, el derecho subjetivo por excelencia. Su contenido, tal y como aparece determinado en el artículo 348 del Código Civil, comprende dos connotaciones genéricas: gozar y disponer. Y cada una de ellas no son siquiera facultades determinadas, sino conjuntos genéricos de facultades (...)*<sup>1674</sup>.

El derecho de la propiedad en España, al igual que en otros países europeos del momento, surge dentro de la irrupción de los derechos y libertades individuales que se van insertando en la historia constitucional a partir de la irrupción del liberalismo. Joaquín Varelas Suanze en su análisis dedicado a la concepción filosófica-política de la libertad y su conexión de los derechos a lo largo de la historia constitucional española, presentada en una ponencia el 12 de junio de 2001, pone como punto de partida el iusnaturalismo naturalista en orden a defender los derechos naturales del hombre, que entre ellos estaría insertado el derecho de la propiedad, cuyo desarrollo se iría plasmando en el modelo liberal y el llamado por el autor liberal-democrático a

<sup>1672</sup> TOMÁS Y VALIENTE, F. La obra legislativa y el dismantling del Antiguo Régimen en JOVER ZAMORA, José M<sup>a</sup> (dir.), *Historia de España*, p.146,

<sup>1673</sup> ARTOLA GALLEGU, M. *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*, Tomo 5 de la Historia de España dirigida por Miguel Artola. Madrid, Alianza Editorial, 1990, p.11

<sup>1674</sup> MONTES, Vicente, 1980, p.60.

partir de la Revolución de 1868<sup>1675</sup>. El derecho de la propiedad privada va a ser recogido tanto en el constitucionalismo decimonónico como en el ámbito de la codificación civil, convirtiéndose en la punta de iceberg de todo el sistema normativo liberal. En la Tabla de Derechos del Estatuto Real aprobada por el Estamento de los Procuradores el 28 de agosto de 1834, se declararía la inviolabilidad de la propiedad, prohibiéndose la confiscación de bienes, aunque sujetándose a las penas legalmente impuestas y a la expropiación, previa indemnización por objeto de utilidad pública (art.9). En los artículos 10 y 11 se reiteraba el derecho a la propiedad junto a la libertad individual y a la seguridad personal. En la Constitución de 1837 en su artículo 10 abordaría el derecho de la propiedad privada, conteniéndose dos afirmaciones contundentes: en primer lugar, que *no se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes* y en segundo que *ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización*. La enmienda de Joaquín M<sup>a</sup> López defendiendo que en el párrafo 1º del artículo debía de constar una afirmación del derecho de la propiedad reconocidos por todos y su carácter de inviolabilidad no prosperaría. Por el contrario, si se aceptó el término justificada presentada también por Armendáriz, quien además propondría una ley de expropiación forzosa<sup>1676</sup>. En el artículo 10 de la Constitución de 1845 se reproduciría literalmente el de la Constitución de 1837, aunque el partido moderado tuvo que enfrentarse nuevamente con el problema desamortizador que atentaba con la esencia de la propiedad privada, por lo que freno la confiscación de bienes con el Real Decreto de 8 de agosto de 1844.

Con la aparición de las doctrinas socialistas en los años centrales del siglo se incrementaría las tesis de defensa de la propiedad privada, especialmente en los textos de Viluma (1848) o Bravo Murillo, quien en sus Proyectos de Leyes Fundamentales de 1852, iría a incluir la llamada seguridad de la propiedad, en la que se incluía dos artículos que ni más ni menos va a suponer la división del artículo 10 del constitucionalismo anterior. La misma línea continuaría en la Constitución Nonnata de 1856 que reproduciría en los artículos 12 y 13 los principios consagrados ya desde la Constitución de 1837. En la Constitución de 1869 se seguiría defendiendo el derecho de la propiedad, concretamente en los artículos 13, 14 y 25, ya que tanto demócratas, moderados como progresistas, la propiedad se convertiría en uno de los pilares de la sociedad. En el artículo 13 se garantizaba el respeto del derecho de la propiedad, en la que se postulaba que *nadie podrá ser privado temporal o*

---

<sup>1675</sup> VARELA SUANZES, Joaquín *Política y Constitución en España 1808-1978*, Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp.115-120.

<sup>1676</sup> MATILLA, María Jesús y FRAX, Esperanza *Libertad de industria y comercio. El derecho de la propiedad en Ayer*, 34, 1999, Derechos y Constitución. Cabe señalar COLOMER VIADEL, A. *El sistema político de la Constitución española de 1837*, Madrid, 1989, p.186, donde se incluye un resumen del debate sobre el artículo 10.

*perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbados en la posesión de ellos sino en virtud de sentencia judicial*, aunque ya en el artículo 14 se mostraba la incorporación del derecho a la expropiación, previa indemnización y por causa de utilidad pública. Con el mismo espíritu se insertaba los artículos 15, 16 y 27 del proyecto Constitucional federal de 1873, que transcribían los artículos 13 y 14 del 69. La tónica patrimonialista de carácter privado incluida en el artículo 10 de 1837, que paradójicamente se resucitaría en el artículo 10 de la Constitución de 1876, por lo que se abriría un amplio debate entre las tesis de Pidal contraria a la misma y las defendidas por Silvela<sup>1677</sup>. En el caso del Código Civil, era natural que en la promulgación de un orden social de tinte burgués, se recogiera sin ninguna cortapisa el derecho de la propiedad privada, lo que permitió consolidar el orden social catapultado por la burguesía en las distintas revoluciones liberales, especialmente en sus artículos 348 y 349.

#### **4.2.1.2. Un incipiente interés general en el ordenamiento jurídico del Estado Liberal.**

La llegada del constitucionalismo democrático supondría la inclusión de la configuración definitiva de la llamada función social de la propiedad, por lo que se quebraría la concepción absoluta, inamovible del derecho de la propiedad privada de tintes individualista. En la SSTC 37/1987, de 26 de marzo fija definitivamente el contenido del derecho de la propiedad en el ordenamiento español superando la posición jurídica derecho de la propiedad privada como un derecho absoluto al considerarlo como *un conjunto de derechos y obligaciones establecidos, de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la comunidad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio está llamada a cumplir. Por ello, la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que deben incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes*. Sin embargo, la limitación del derecho de la propiedad privada ha sido una constante en nuestro ordenamiento. Ya en la Ley 1, título XXVIII de la Partida 3<sup>o</sup> se define como un derecho limitado por las normas divinas y humanas: señorío es poder que ome ha en su cosa de fater della, e en ella lo que quissiere: segund Dios e segund fuero. La irrupción del liberalismo va a provocar no solamente la consagración del derecho de la propiedad privada sino al mismo tiempo su propia limitación fundamentada en una incipiente utilidad pública, como podemos apreciar a modo de ejemplos el artículo 42 del proyecto del Código Civil de 1821 y el artículo 391 del Proyecto del Código

<sup>1677</sup> MATILLA, María Jesús y FRAX, Esperanza, 1999, pp.34-38.

Civil de 1851. En el Código Civil de 1889 en su artículo 348 ya se plantea a la propiedad como *el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes*. En la STS de 22 de enero de 1914 se habría consagrado definitivamente los límites del derecho de la propiedad privada en el ámbito español: *Si bien es esencia y atributo peculiar del dominio que aquel a quien pertenece una cosa puede disponer de ella libremente, esta facultad no revisten caracteres absolutos y omnímodos, en razón a que toda propiedad se subordina siempre a limitaciones determinadas, ya por las leyes, ya por pactos convenidos o por costumbres establecidas y aceptadas*<sup>1678</sup>. En la legislación especial del periodo liberal se va a introducir una serie de medidas de delimitación del derecho absoluto de la propiedad privada. No es aquí lugar para analizar la amplia producción normativa que supuso la intervención estatal en aquellos sectores que consideraron dignos de ser regulados públicamente, pero podemos citar todo el ordenamiento jurídico que surgió en torno a la minería, las aguas públicas (como fue el caso la Real Orden del 24 de mayo de 1853, Real Decreto de 19 de abril de 1860, la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866), las políticas sanitarias, con la consiguiente regulación en la esfera privada, especialmente en el ordenamiento urbanístico, de las que destacaríamos las Reales Ordenes del Ministerio de Gobernación de 11 de abril de 1860 y de 19 de junio de 1861, que daría lugar a un derecho del Medio ambiente que se fue delimitando a lo largo del periodo. Quizás sea en la ley de expropiación forzosa donde encontremos el ejemplo más significativo en la intervención de la Administración sobre el derecho absoluto de la propiedad privada<sup>1679</sup>.

#### **4.2.2. El Patrimonio Monumental en el ámbito de la construcción jurídica del Dominio Público de la España Liberal: La transformación jurídica del Patrimonio Monumental Estamental como bienes nacionales.**

Con la transformación jurídica de la propiedad estamental del Patrimonio Monumental en España va a surgir dos concepciones jurídicas determinadas: Los Bienes Nacionales y el llamado Patrimonio Nacional. Aquellos bienes históricos-artísticos que habían pertenecidos a las órdenes religiosas fueron designados bajo la denominación de Bienes Nacionales, al igual que los fundos o cualquier inmueble sin ningún tipo de valor religioso. Al mismo tiempo en el caso del Patrimonio Regio, sería designado paulativamente como Patrimonio Nacional, término que aún hoy es utilizado, al considerar que el sujeto titular de estos bienes es la Nación. El Patrimonio Monumental considerado como tal en la etapa de la Monarquía Absoluta se consideraría como propiedad real, por lo que se exceptuaba de la misma a las colecciones artísticas de la Iglesia, que eran consideradas como bienes de interés religioso, y de los linajes aristocráticos, que correspondían a la esfera privada. Con el advenimiento de la Revolución Liberal, especialmente desde la etapa desamortizadora, y posteriormente con la etapa isabelina, el Estado-nación,

---

<sup>1678</sup> La cita está recogida de ANGUITA VILLANUEVA, 2006, p.27.

<sup>1679</sup> VILLAR PALASÍ, J.L. *Técnicas remotas del Derecho Administrativo*, Madrid, 2001.

como sujeto particular, integraría en un solo dominio al conjunto de bienes que consideraría digno de proteger. El régimen jurídico patrimonial tanto de los Bienes Nacionales como del Patrimonio Nacional se aproximaría al sistema tutelar de los bienes de dominio público, especialmente por los caracteres de uso público, indisponibilidad e in

Conversión del Patrimonio Nacional	Patrimonio Monumental Eclesiástico	Patrimonio Monumental Regio
Despotismo Ilustrado	Tutela del derecho regio sobre el patrimonio eclesiástico	Separación entre lo público y privado del Patrimonio Regio.
Estado Liberal	Proceso de nacionalización de los bienes	Configuración del patrimonio nacional

#### 4.2.2.1. La peculiar tutela del Patrimonio Eclesiástico Monumental.

Nadie duda hoy la impronta que ha tenido la Iglesia Católica en la configuración de la cultura española, su papel instrumentalizador en la vida política y social desde la Edad Media hasta prácticamente nuestros días, dejando como constancia material del mismo un amplio legado histórico, formado por bienes muebles e inmuebles de carácter histórico-artístico es amplísimo, un porcentaje muy elevado con respecto al conjunto del Patrimonio Cultural español. Iguacen Borau define al Patrimonio Eclesiástico Español como el *conjunto de templos, archivos, bibliotecas, museos, retablos, esculturas, pinturas, telas, tablas, orfebrería, mobiliario y objetos interesantes por su valor histórico y artístico, en posesión de los distintos entes eclesiásticos de la Iglesia católica*<sup>1680</sup>. Sin embargo, este amplio bagaje material no siempre se supo conservar, no solamente por la impericia de la propia Administración, sino por la propia actitud de la Iglesia, que dieron como resultado intervenciones del Estado con el objeto de poder conservar y proteger dichos bienes, lo que originó una amplia discusión doctrinal sobre la potestad del Estado sobre los bienes eclesiásticos de interés histórico y religioso, tanto en la supuesta identidad diferenciadora de su naturaleza jurídica, como su propio régimen patrimonial, discusión que incluso llegaría hasta nuestros días. Y es que nuevamente se subraya en el fondo la concepción patrimonialista de la tutela de los bienes históricos y artísticos, al identificar tutela pública con propiedad pública, y al identificarlos con una intromisión en la propiedad privada. De hecho podemos subrayar un artículo del catedrático Antonio Martínez Blanco, publicado a raíz de la celebración del Concordato de 1953, la esencia doctrinal que había presidido la doctrina española hasta este momento: 1) Suponer que la inclusión de un bien en el Patrimonio artístico-nacional o su consideración como parte del tesoro artístico nacional no es compatible con su propiedad privada; 2) Excluir totalmente la competencia estatal sobre los bienes

<sup>1680</sup> IGUACEN BORAU, D. *El Patrimonio Cultural de la Iglesia*, Madrid, 1982, p.3.



preciosos de la Iglesia en su afán apologético y de defensa material de dicha propiedad (...), en base a la exclusiva jurisdicción eclesiástica sobre los mismos, como si ambas jurisdicciones fueran incompatibles<sup>1681</sup>. La superación de la concepción patrimonialista del Patrimonio Monumental, abriría nuevos cauces en la tutela pública de los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico como se reflejarían en los acuerdos entre la Iglesia y el Estado de 1979, que vinieron a fortalecer unas relaciones imprescindibles en la necesidad de conservar este amplio patrimonio cultural, por lo que ha podido significar una superación de dos instituciones que en muchos momentos no supieron gestionar conjuntamente el valor de este conjunto de bienes, probablemente por la dualidad de lecturas valorativas que se le daban, que en sus divergencias, surgían los conflictos que llenarían prácticamente todo el periodo liberal<sup>1682</sup>. La promulgación de la Constitución en su artículo 46 y la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico-Artístico daría una nueva vitalidad a la relación entre la Iglesia y el Estado, en relación a la tutela de los bienes culturales en el ámbito español<sup>1683</sup>. Al mismo tiempo se ha ido produciendo en los últimos años un amplio corpus doctrinal en relación al sometimiento a la tutela del Estado de los bienes de interés religiosos que ostentan un valor cultural<sup>1684</sup>. Motilla,

---

<sup>1681</sup> MARTINEZ BLANCO, Antonio *El Patrimonio Artístico y Documental eclesiástico como parte del patrimonio nacional en España*, pp.46-47.

<sup>1682</sup> En el espíritu conciliador del Acuerdo de 1979 podemos resaltar el artículo XV donde *La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivo el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas, en el marco del artículo 46 de la Constitución*. En el texto del Preámbulo se establece en relación al patrimonio cultural: *El patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado*. FERNANDEZ CANTON, José María *El patrimonio cultural de la Iglesia de España y los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede*, León, 1980. La doctrina ha sido muy crítica con este Acuerdo Iglesia-Estado, cuyo análisis queda fuera de este estudio, pero llama la atención citar las de Carlos Corral Salvador y Alberto de la Hera: Solamente encontramos en el Acuerdo un aspecto que consideramos positivo: el hecho inequívoco que cierra la puerta a la nacionalización de los bienes culturales de la Iglesia, cuya propiedad por la Iglesia, más que reconocer, acepta". CORRAL SALVADOR, Carlos; DE LA HERA, Alberto *Bienes Culturales e Intereses Religiosos*, *Revista de Derecho Privado*, Nº 66, enero 1982, p.435.

<sup>1683</sup> DE LA CUESTA, José María Aspectos jurídicos-civiles del tratamiento de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica española en la ley del Patrimonio Histórico del 25 de junio de 1985, en *Revista Española de Derecho Canónico*, Vol.44, Núm.122, enero-junio de 1987, pp.149-162.

<sup>1684</sup> Cabe mencionar entre la producción bibliográfica CORRAL, Carlos *El Patrimonio Cultural de la Iglesia*, *Revista de Fomento Social*, 40, 1985, pp.431 y ss; ALVAREZ CORTINA, Andrés, Bases para una cooperación eficaz Iglesia-Estado en defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural en *Ius Canonicum*, Vol. XXIV, núm. 49, 1985; PESTCHEN, Principios informadores de los estatutos jurídicos del Patrimonio cultural religioso en los países de Europa Occidental en *Patrimonio Cultural*, Documentación-Información. Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, n.4, 1986, pp.19 y ss; PRESAS, Concepción Alternativas legales a una cuestión patrimonial: los bienes artísticos de la Iglesia española, en *Anuario del Derecho Eclesiástico*, 1, 1985, pp.207 y ss.

siguiendo las tesis doctrinales italianas de Bellini y Maffeo resume la cuestión de la tutela jurídica de estos bienes: El destino religioso o de culto del bien es el fundamento último del régimen especial sobre los bienes de la Iglesia de interés cultural<sup>1685</sup>. Fuera de esta finalidad rige el principio del sometimiento de los bienes privados al Derecho Común de protección del patrimonio histórico-artístico<sup>1686</sup>. De la misma manera Isabel Aldanondo, define de inconstitucional la exención general del patrimonio histórico de la Iglesia respecto a la protección estatal, al mismo tiempo que sería inconstitucional si la tutela estatal pasara por alto el carácter religioso y la función litúrgica de estos bienes<sup>1687</sup>.

Sin embargo, la tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico en el caso español se va a convertir en uno de los puntos de confrontación a la hora de definir una política institucional. La dualidad entre respeto al bien religioso como bien litúrgico y su conversión en bienes nacionales es lo que va a primar precisamente el conflicto que se va a producir entre la Iglesia y el Estado en las convulsiones liberales decimonónicas, así como la aparición de un incipiente valor cultural de algunos bienes que consideran testimonios de valores artísticos e históricos que van a nacionalizar a pesar del fin litúrgico que ostentaba<sup>1688</sup>. El catolicismo, en cierta manera, se había convertido desde la etapa medieval, y acrecentada en el ámbito contrarreformista en la razón de ser de la esencia del nacionalismo español, por lo que el Estado para fomentar sus raíces tenía la obligación moral de proteger su patrimonio. Sin embargo, los caminos del liberalismo español no siempre siguieron un curso plenamente ultracatólico por lo que en muchos sectores intelectuales del momento van a

<sup>1685</sup> MARTINEZ BLANCO, A. Las cosas destinadas al culto en el derecho canónico en *Revista Española de Derecho Canónico*, Vol.43, Núm.121, julio-diciembre, 1986, pp.511-518.

<sup>1686</sup> MOTILLA, Agustín *Régimen jurídico de los bienes históricos-artísticos de la Iglesia Católica*, Colección Estudios de Derecho Público, Editorial EUROLEX, 1995, pp.83-120.

<sup>1687</sup> Isabel Aldanondo a la hora de analizar el marco constitucional de la actividad del Estado en materia del Patrimonio Histórico de la Iglesia plantea dos premisas; A) La inconstitucionalidad de la exención general del Patrimonio Histórico de la Iglesia respecto a la protección estatal, por la que enuncia los siguientes motivos: a) La inconstitucionalidad procedería del mandato constitucional de protección de Patrimonio Histórico del artículo 46, cualquiera que sea su titularidad, por lo que su limitación sería contrario a este precepto; b) Al mismo tiempo con la exención de los bienes culturales de la Iglesia Católica se contradiría el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, que no permite dejar sin tutela un patrimonio por razones religiosas; c) El principio de laicidad o no confesionalidad del Estado, consagrado en el artículo 16.3 de la Constitución, al no facultar en ningún momento que se prive de protección a un sector del patrimonio histórico-artístico por su orientación ideológico-religioso, su contenido sacro o su función litúrgica y B) Inconstitucionalidad de la tutela estatal del patrimonio histórico de la Iglesia que pase por alto su carácter religioso y su función litúrgica por lo que a) La Administración cultural, en virtud del mandato constitucional, ha de respetar el contenido religioso y la función litúrgica de los bienes culturales; b) La garantía de la libertad artística, por la que esta protección, no se circunscribe a la creación de la obra en sí, sino también al destino y sentido con que fue concebida, a su finalidad de utilización; c) La garantía de libertad religiosa, consagrada en el artículo 16.1 de la Constitución. ALDANONDO, Isabel, protección de los bienes culturales y libertad religiosa, *Anuario del Derecho Eclesiástico del Estado*, Vol.III, 1987, pp.285-298.

<sup>1688</sup> Sobre la función pública de estos bienes, IGUACEN BORAU, D. El patrimonio cultural de la Iglesia, al servicio del pueblo en *Revista española de Derecho Canónico*, Vol.41, Núm.119, 1985, pp.485-491.

ir surgiendo unas connotaciones laicistas a la hora de considerar los bienes monumentales del Patrimonio Eclesiástico, por lo que se iría cuajando un ambiente de réplica civil a la lectura religiosa, que los llevaría a la renovación conceptual que ya había surgido en el proceso revolucionario francés, la descontextualización de los bienes, por lo que primero el romanticismo y los movimientos históricos, y posteriormente la investigación científica, especialmente en el campo de la arquitectura modernizarían el concepto de los bienes eclesiásticos, le daría un contenido moderno, lejos de toda pretensión clerical. A pesar de este empeño por la conservación patrimonial, las oleadas anticlericales que se irían sucediendo en los movimientos revolucionarios de la España Liberal culminarían en amplios capítulos de destrucción patrimonial, siendo probablemente los protagonizados en la revolución de 1868 los más significativos. El paso crucial será cuando estos bienes dejen de tener un referente religioso para convertirse en culturales, definiéndose con ello un patrimonio específico, paso que poco a poco se irá perfilando en la etapa isabelina, por lo que en el fondo se estaba perfilando una protección indirecta del patrimonio, a través de la promulgación de una normativa penal en orden a proteger los bienes eclesiásticos.

La concepción del dominio absoluto de la propiedad eclesiástica, no cabe duda que será uno de los problemas más importantes que se va a encontrar la Administración española en el periodo liberal en los aspectos referentes a la tutela del Patrimonio Monumental en el ámbito del derecho privado va a ser el sometimiento de los bienes eclesiásticos al derecho del Estado<sup>1689</sup>. Y es que la confrontación entre los intereses de la Iglesia y los del Estado van a llevarles a una situación jurídica delicada que irá oscilando entre las pretensiones de nacionalización por parte del Estado, al intentar convertirlos en bienes nacionales o su tutela como corresponde a un bien que se quiere proteger de las pretensiones de enajenación por parte de algún párroco o cualquier autoridad eclesiástica que pudiera afectar al bien protegido por el Estado. La imposición por parte del Estado Liberal de la inalienabilidad de los bienes eclesiásticos será constante en el ordenamiento jurídico del Patrimonio Monumental español. En un breve repaso a la evolución de la tutela pública sobre el Patrimonio Eclesiástico Monumental podemos contemplar como desde la Edad Media se está intentando poner freno a la libre disposición de aquellos bienes que pertenecientes a la Iglesia representan un valor para la propia nación. La primera ley hispánica que se refiere a la cuestión es el Código de Eurico (476), que limitaba los poderes del Obispo para enajenar bienes de su Iglesia, exigiéndole el consentimiento del clero. Posteriormente, los Concilios españoles, insisten en la prohibición de enajenar bienes de la Iglesia, así como

---

<sup>1689</sup> BARRIO GOZALO, Maximiliano La Propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen, en DE DIOS, Salustiano; INFANTES, Javier; ROBLEDÓ, Ricardo; TORRIJANO, Eugenia (Coords.) *Historia de la propiedad en España Siglos XV-XX*, Centro de Estudios Registrales, Salamanca, 3-6 de junio de 1998, pp.20-22.

en el Liber Iudicorum (654), recopilación de leyes llevada a cabo por Recesvinto, añade un precepto cuya relevancia jurídica será trascendental, al otorgar validez civil a los cánones reguladores de la enajenación de los bienes civiles. Puede afirmarse que ésta es la primera norma secular española que otorga eficacia civil a los controles establecidos por las normas eclesiásticas para enajenar bienes temporales de la Iglesia. Sería ya durante la Alta Edad Media cuando se refuerza el principio de inalienabilidad al ser considerado que la titularidad de los bienes no se atribuye a la Iglesia, sino a Dios, la Virgen o los Santos, por lo que al no ser considerada la institución eclesial la verdadera propietaria los bienes muebles serán intocables. De ahí que ya en la segunda mitad del siglo XIII, el Liber Iudicorum de Recesvinto al traducirse en castellano como Fuero Juzgo y difundirse como el texto legal válido para grandes espacios territoriales de la Península va a seguir dejando en vigor la pervivencia que otorgaba validez civil a las normas conciliares sobre la enajenación de los bienes eclesiásticos. Posteriormente, en las Siete Partidas se recogería esta idea, en cuyo Título XV del Libro I llevaría por título *De las cosas de la Iglesia que no se deben enajenar*, donde se recoge la legislación canónica sobre la enajenación de los bienes eclesiásticos, estableciéndose los supuestos en que no deben de enajenarse bienes de la Iglesia, e incluso en la Ley II dispone de la necesidad del consentimiento del Cabildo para la válida enajenación por los prelados de los bienes de sus iglesias y la Ley XII autoriza a la Iglesia la acción reivindicatoria para recuperar los bienes enajenados. Los Fueros Reales se ocuparían de los bienes muebles en la que se limitaba el uso de las *cosas dadas legítimamente a las iglesias por los reyes u otros fieles, deben guardarse en ellas, y firmadas en poder de la Iglesia*, así como *Los prelados (obispos o efectos) recibirán los bienes ante el cabildo de su iglesia, haciendo todo un inventario de lo que se recibe, no pudiéndose enajenar ningún bien inventariado, que deberá ser devuelto a la Iglesia, devolviéndose al comprador lo que pagó, si el precio fue gastado en pro de la Iglesia e incluso ningún prelado podía vender ni enajenar los bienes que recibía en nombre de la Iglesia, pero sí lo que ganase o heredase por sí mismo*. En 1348 se promulga el Ordenamiento de Alcalá, en el que se refiere la conservación de tesoros, reliquias, imágenes y ornamentos de las Iglesias, que debían ser guardados, prohibiéndose deshacer o tirar parte de las imágenes hechas en plata, o sobredoradas con piedras preciosas, prohibiéndose además su venta o empeño, debiéndose ser restituido a la Iglesia su precio, imponiéndose multas para el ocultamiento o negación de estas transmisiones ilegales. Si en caso de guerra el rey tomaba la plata de las iglesias, debía después restituirla sin ninguna disminución<sup>1690</sup>.

1º fase. Etapa de la ilustración. Con las ideas del reformismo ilustrado de los Borbones se va a asentar las bases de la intervención estatal, por la que los bienes históricos-artísticos correspondientes a la Iglesia Católica van a estar tutelado por la Academia de la Historia en el caso de las construcciones de la

<sup>1690</sup> MACARRON, A. 1997, pp.40-41.

arquitectura religiosa, especialmente en el ámbito del decoro, como fueron las reales ordenes de 1777, especialmente los dedicados al patrimonio eclesiástico. La Novísima Recopilación decretó la obligación de la jerarquía eclesiástica de solicitar la supervisión de las obras de edificios a la Academia de San Fernando.

2º) Con la llegada de la invasión francesa, se abre el capítulo de la nacionalización de los bienes eclesiásticos del Patrimonio Monumental que se intensificará con las medidas desamortizadoras que se prolongaría durante todo el siglo XIX, aunque los Concordatos de 1851, de 1859 y 1867, intentaron paliar la cuestión. Sin duda subyace la idea de una España tradicionalista de profundas raíces católicas, que no ha visto con buenos ojos las medidas desamortizadoras llevadas a cabo con las propiedades de la Iglesia, y que en unos años de conflicto entre liberales y carlistas, el Estado intentará hacer un programa de salvaguarda de las obras religiosas, con unas pretensiones de apaciguar amplios sectores de población que podrían definitivamente desligarse del proyecto de construcción de un régimen liberal.

3º) En los primeros decenios del siglo XX las disposiciones civiles sobre el Patrimonio Histórico-Artístico se van a empezar a aplicar sobre las propiedades eclesiásticas de carácter monumental, aunque no se va a dar nuevos procesos de nacionalización, sino que por ambos sectores se empieza a colaborar en la protección de los bienes que integran el Patrimonio Monumental<sup>1691</sup>. La limitación de sobre la libertad de disposición y gozo del bien por la Iglesia se convierte en uno de los triunfos institucionales del Estado en el ámbito de la tutela del Patrimonio Monumental.

1º) Al igual que en el resto de los ordenamientos liberales va a primar el principio de indisponibilidad del bien de interés religioso del Patrimonio Monumental de la Iglesia por parte del Estado.

2º) La libre disponibilidad de la Iglesia en la Restauración de sus propios bienes. Deber de conservar por parte del Estado.

3º) Al mismo tiempo se favorecería una política institucional de convertir a los archivos y museos eclesiásticos en servicios públicos<sup>1692</sup>.

	Conceptualización jurídica	Propiedad de los bienes	Sistema Normativo de
--	----------------------------	-------------------------	----------------------

---

<sup>1691</sup> Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX Revista Española de Derecho Canónico, 1946; Presas Barrosa, Ayer y hoy en la enajenación del Patrimonio Eclesiástico y la legislación hispana. *Actualidad Administrativa*, 16, 24 de abril de 1988, pp. 869-884.

<sup>1692</sup> MORRAS ETAYO, José Luis, La normativa particular de la Iglesia en España sobre el archivo histórico diocesano, en *Revista Española de Derecho Canónico*, Vol.60, Núm.154, Enero-junio, 2003, pp.229-254.



	de los Bienes Religiosos de interés histórico y artístico	de interés histórico y artístico	tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico
<b>Ilustración</b>	Incipiente concepción de los bienes eclesiásticos como bienes de interés histórico y artístico	La propiedad eclesiástica pertenece al Reino	Sistema Normativo fundamentado en las Regalías.
<b>Estado Liberal Inicial</b>	Los bienes eclesiásticos como bienes de interés nacional.	A raíz de las medidas desamortizadora, nacionalización de los bienes eclesiásticos	Tutela del Patrimonio Eclesiástico Monumental desamortizado.
<b>Crisis del Estado Liberal</b>	Los bienes eclesiásticos monumentales como bienes de interés litúrgico y monumentales	Respeto al derecho de la propiedad eclesiástica. Sometimiento a la legislación civil	Tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico

#### 4.2.2.2. Un nuevo Patrimonio Monumental en la España Liberal: Del Patrimonio Monárquico a la concepción del Patrimonio Nacional.

La llegada del Estado Liberal en España va significar una nueva realidad jurídica del Patrimonio Monumental: el llamado Patrimonio Nacional, a raíz de la transformación de la naturaleza jurídica del Patrimonio de la Monarquía, convirtiéndose en verdaderos bienes nacionales. Como ocurriría con el Patrimonio Eclesiástico, el Patrimonio Monárquico va a ser considerado por el Estado en su evolución doctrinal como una propiedad especial, donde conviven intereses generales e intereses privados. El concepto de Patrimonio Nacional ha sido un tema de discusión en la historiografía jurídica española. R. Barcia en su Diccionario de la lengua castellana (1860) contrapone tajantemente los términos pertenecientes a la nación y los pertenecientes al rey. Gos Cayón va a delimitar los bienes patrimoniales en cuatro clases: el Patrimonio de la Nación, Patrimonio del Fisco, Patrimonio de la Corona y Patrimonio libre de los Reyes, mientras que López Rodó distingue entre los bienes afectos al uso y servicio del Rey o Jefe del Estado, y no en general los que sirven de medios materiales a la administración<sup>1693</sup>. Dentro de los bienes que forman parte del Patrimonio Nacional, un gran número estarían incluido en el Patrimonio Monumental, constituyendo un legado indiscutible de la historia de la nación española<sup>1694</sup>. La conceptualización jurídica como bienes de

<sup>1693</sup> Conviene distinguir los bienes históricos-artísticos que pertenecían a la Monarquía y entraría a formar parte del Patrimonio Nacional como bienes de identidad como pueblo tras las legislaciones liberales, de los que en la legislación española contemporánea, concretamente el artículo 2 de la Ley 23/1982, en la que se establece que *tiene la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la representación que la Constitución y las leyes les atribuyen*.

<sup>1694</sup> Los bienes culturales que forman parte del Patrimonio Cultural en virtud de la Ley 23/1982, de 16 de junio, en su artículo 4 serían los siguientes:

Uno. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro;



dominio público ha sido actualmente discutida por la doctrina española<sup>1695</sup>, aunque en el ámbito legislador se establece que los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, y gozarán del mismo régimen de exenciones tributarias que los bienes de dominio público del Estado, y deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad como titularidad real (art.6.2). Un hecho importante es que los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Nacional podrían ser propuestos para su desafectación, a excepción de los que tengan valor histórico-artístico.

Desde esta posición, podemos definir al Patrimonio Monumental Regio en el ámbito de la España Liberal como el conjunto de bienes inmuebles y muebles, que van a que se le fue dotando de un valor patrimonial, de carácter histórico y artístico, y de clara significancia política, al convertirse en verdaderos símbolos del Estado, primero como exaltación de la Monarquía que

---

Dos. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos.

Tercero. El Palacio Real de San Lorenzo El Escorial, el palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terreno de labor, y la llamada, con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.

Cuarto. Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrio y sus terrenos anexos.

Cinco. El monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe. El Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado, con su Palacio y edificaciones anexas; la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos.

Seis. El Palacio de la Almudaina con sus jardines sito en Palma de Mallorca.

Siete. Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.

Para la exacta delimitación de los bienes enumerados en los seis primeros apartados de este artículo, se atenderá al perímetro fijado por los correspondientes Decretos de declaración de conjunto histórico-artístico. En su defecto, se seguirá el criterio de preservar la unidad del conjunto monumental.

Al mismo tiempo formarían parte del Patrimonio Nacional los derechos de patronatos y administración sobre las siguientes fundaciones, denominados Reales Patronatos, en virtud del artículo 5º de la Ley 23/1982: La iglesia y convento de la Encarnación; Iglesia y Hospital del Buen Suceso; El Convento de las Descalzas Reales; La Real Basílica de Atocha; La Iglesia y Colegio de Santa Isabel; La Iglesia y Colegio del Loreto, todas situadas en Madrid, a los que habría que añadir el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Monasterio de las Huelgas en Burgos, el Hospital del Rey, en dicha capital, el convento de Santa Clara en Tordesillas y el Convento de San Pascual en Aranjuez.

En el artículo 2º de la Ley se señala que tienen *la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen*. El artículo 3º dispone que *en cuanto sea compatible con la afectación de los bienes del Patrimonio Nacional (...) el Consejo de Administración adoptará las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes*.

<sup>1695</sup> ANDRADA PFEIFFER, R. *El Patrimonio Nacional, Legado de la Corona*, Acto de recepción de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 26 de junio de 1986; DIEZ MORENO, Fernando *La consideración jurídico-constitucional del Patrimonio Nacional*, en *Boletín Annabad*, XXXIX (1989), 1, pp.127-136.

sintetizaba en ella la idea de la Nación, y posteriormente como identificadora de los caracteres del conjunto de los ciudadanos que forman la comunidad política del Estado Nacional. La dificultad jurídica surge en el ámbito de la tutela pública de este Patrimonio Monumental, que como en otros países del entorno europeo, se va a ir adoptando una posición de nacionalización de dichos bienes, que en el caso español, por las dificultades de la irrupción del liberalismo, las medidas fueron más tardías, por lo que en el ámbito del Patrimonio Monumental de carácter regio nos vamos a encontrar con una distinción clara en todo momento entre aquellos bienes que van a ser dominio privado del Rey, que en principio van a responder con las peculiaridades de un propietario privado, y los bienes que aunque estén adscritos a la Corona, se identifiquen con la identidad nacional, y por consiguiente pasan a ser de propiedad pública.

La configuración de un Patrimonio Monumental Regio nacerá desde los propios orígenes del Estado al que va a regir, al considerar de su propiedad todos los bienes muebles e inmuebles que estén situados en el territorio de dominación regia, y al quedar diluida en cierta forma un verdadero derecho privado. La etapa de mayor esplendor de los Sitios Reales correspondería al periodo comprendido entre 1550 y 1880, que con el fin de exaltar la institución regia se fue articulando una red de palacios, jardines, cazaderos y casas de recreos que alcanzaría su configuración en el reinado de Felipe II, ampliándose y perfeccionándose durante los tres siglos siguientes, a lo que se uniría un conjunto de conventos y monasterios de patrocinio real que proporcionaba el bagaje religioso de la identidad monárquica, especialmente al convertirse en la mayoría de ellos en establecimientos funerarios. Será durante el Despotismo Ilustrado cuando se produzca una apertura pública del dominio privado del Rey, de sus colecciones de pinturas y esculturas que hasta este momento han quedado guardadas a sus ciudadanos, y que con el objetivo de difundir la idea de felicidad y educación a sus súbditos les otorgará la posibilidad de contemplarlas y al mismo tiempo le buscará incluso un destino particular: depositarlas en un edificio público, aunque bajo la directa disposición regia. Así las colecciones de bienes muebles que habían sido confeccionadas por los Austrias y engrandecidas por los Borbones van a salir a la luz pública para el conocimiento del pueblo, de sus súbditos, una medida excepcional que supera la idea de las galerías públicas de príncipes y monarcas que habían surgido en el Antiguo Régimen<sup>1696</sup>.

Con la llegada de las ideas revolucionarias francesas y su plasmación con el reinado de José I Bonaparte la concepción pública del Patrimonio Real se acentúa, pero cabe anotar que su identidad jurídica sigue estando adscrita a

<sup>1696</sup> SANCHO, J.L. *La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo histórico de los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional*. Editorial Patrimonio Nacional, 1995.

la persona del Rey, que es el verdadero titular de los bienes que lo integran, y que por ello se va a comportar como un particular sobre ellos, pudiendo adquirir o despojarse de los que considere oportuno. En esta misma línea nos vamos a encontrar en el reinado de Fernando VII, que aunque en los periodos constitucionalistas se intenten desligar un dominio público y un dominio privado de los bienes del rey, los pertenecientes al Patrimonio Monumental, seguirán inscritos en este segundo grupo, como se puede apreciar en las disposiciones normativas del momento, especialmente en el caso de los bienes inmuebles (Palacios y Sitios Reales), y en los propios bienes muebles (Colecciones regias de pinturas y esculturas), que se depositan en todo caso en un edificio público de tutela regia: el futuro Museo del Prado, pero que en este momento se denominará el Real Museo, donde se reafirma el carácter privado de los bienes que integran esta colección. En estas circunstancias se puede hablar de una tutela pública limitada del Patrimonio Monumental Regio, al concebirse como un dominio privado aunque con intenciones aperturistas de que sea conocido por su pueblo. El testamento regio de Fernando VII es un buen testimonio del carácter de dominio privado que todavía se perfila del Patrimonio Monumental regio. El triunfo del liberalismo en los años finales del reinado de Isabel II va a significar un nuevo capítulo en la tutela pública del Patrimonio Monumental Regio, ya que en 1865 los bienes muebles pertenecientes a las colecciones regias van a pasar a convertirse en propiedad nacional. La medida va a tener unas consecuencias jurídicas sin precedentes ya que se convertiría definitivamente en propiedad nacional, dejando de ser su legítimo dueño el Monarca, para pasar a las manos de la Nación, un ente con personalidad jurídica propia que simbolizará al conjunto de los ciudadanos, y que por tanto los bienes adquiridos se identificarán con la nueva situación política. A partir de la Revolución del 68 y la I República las medidas que habían afectado a los bienes muebles del Patrimonio Monumental Regio se extenderán a todos los bienes inmuebles.

No solamente el Patrimonio Monumental Regio va a experimentar un cambio en la titularidad dominical en el proceso liberal, sino que incluso el propio significado simbólico va ir transformándose a lo largo de este periodo. El Absolutismo Regio convierte a su propio Patrimonio Monumental en instrumento de exaltación de la institución monárquica y por consiguiente de la exaltación del Estado, con una valoración política, por lo que los palacios reales, las iglesias cortesanas y las colecciones regias de bienes muebles convierten a la figura del monarca en un rey culto, y por consiguiente preparado para gobernar a su pueblo. El carácter histórico y artístico de estos bienes quedará diluido en principio por un proyecto de ennoblecimiento de su propia figura, para lo que el súbdito admirara más en las colecciones regias y en los inmuebles la exaltación de su monarca más que su admiración estética o histórica. La idea de la felicidad y del bien común propia de la Ilustración abrirán una nueva perspectiva en la valoración del Patrimonio Monumental

Regio. La identidad nacional de los bienes pertenecientes al Patrimonio Monumental Regio se desarrollará a partir de la invasión francesa, al identificarse estos bienes con la conciencia nacional, no solamente como dominio privado del Rey, sino como entes de claro de valor patriótico. Al igual que ocurría con los bienes eclesiásticos del Patrimonio Monumental, se va a producir en el Patrimonio Monumental Regio, un proceso de descontextualización y sin precedentes, ya que los bienes perderán en principio la funcionalidad inicial por los que habían sido concebidos: exaltar a la Corona, para convertirse en bienes que claramente resalten los valores nacionales, por lo que se ha cambiado el linaje de la institución monárquica por el linaje de la propia Nación. Por otra parte, los bienes muebles se colocaran con el tiempo en un museo, abandonado su ubicación original, las galerías de los palacios reales, con el objeto no de engalanar las habitaciones del Monarca sino de que sean conocidos por sus súbditos con una perspectiva museológica radicalmente distinta. En la misma línea ocurrirá aunque más lentamente con los bienes inmuebles, ya que los palacios reales seguirán identificándose aun con poder político más que con el carácter histórico o artístico que posteriormente va a presidir su valoración patrimonial. Fernando Díez Moreno resume la evolución del patrimonio nacional de esta manera: Hasta el siglo XIX predomina la confusión entre los Patrimonios de la Corona y del Estado, incluso con el propio patrimonio privado de los Reyes, confusión que se extiende también en una primera época, al Reino en si mismo considerado. Todo ello no excluye la existencia de atisbos de separación, pero insuficientes para permitir una calificación jurídica suficientemente fundamentada.

Durante el siglo XIX, el Patrimonio Nacional pasa, por las siguientes situaciones:

- a) Refundición entre el Patrimonio de la Corona y la Hacienda Pública, a excepción de los Palacios Reales, que se asignan al rey en su calidad tal. Son pues, bienes del Estado asignados al Rey (Constitución de Cádiz).
- b) Separación de la Corona y la Hacienda Pública, teniendo aquel la consideración de propiedad de la Corona con limitaciones, especialmente en cuanto a su enajenación o donación (1814-1820).
- c) Bienes del Estado asignados al Rey (Trienio Constitucional 1820-1823), previamente enumerados y deslindados.
- d) Vuelta a la separación entre Patrimonio de la Corona y del Estado (1823-1865).
- e) Consideración del Patrimonio de la Corona, separado del Patrimonio del Estado y del Patrimonio privado del Rey, y con carácter indivisible, inalienable e imprescriptible, exento de contribuciones y adscrito a las necesidades de la Corona (1865-1869).

- f) Supresión del Patrimonio de la Corona con esta consideración, pero destinándose al uso o servicio del Rey (1869-1872).
- g) Consideración del Patrimonio de la Corona como Patrimonio de la Nación, y no del Estado (1872-73).
- h) Incautación de los bienes del Patrimonio de la Corona que pasan a ser del Patrimonio del Estado (I República, 1873-1876).
- i) Vuelta al régimen de 1865: Patrimonio de la Corona, perteneciente a esta en pleno dominio (1876-1931)<sup>1697</sup>.

#### **4.2.3. Los límites de la tutela pública de los bienes de interés histórico y artístico en el dominio privado en la España Liberal.**

##### **4.2.3.1. El Patrimonio Monumental como derecho inherente del propietario privado.**

La impronta del derecho de la propiedad privada como derecho absoluto va a delimitar todo la base jurídica del ordenamiento tutelar del Patrimonio Histórico de la España Liberal, al igual que en principio ocurriría en todos los países del contorno europeísta, pero probablemente con la diferencia de que en cierta forma la primacía de la esfera privada en el ámbito de la naturaleza jurídica de los bienes históricos-artísticos va a ser prácticamente una constante primordial en nuestro ordenamiento, teniendo que llegar al Estatuto de 1926 para poder considerar una verdadera concienciación pública de unos bienes históricos-artísticos que pudieran ser intervenidos por el Estado. El axioma titularidad del bien en función del régimen de la propiedad por consiguiente será constante en la construcción jurídica del Patrimonio Monumental. Quizás la impronta que fue adquiriendo el Código Civil en el ordenamiento jurídico español, priorizando el derecho de la propiedad privada sobre los intereses generales fuera la causa primordial del inmovilismo que va a caracterizar la configuración del Legado Patrimonial como bien de interés público en el ámbito español. La pasividad de la Administración Pública en cualquier caso contribuiría sin ninguna duda a esta situación, por lo que en muchas ocasiones no cabe duda que la iniciativa privada ayudara a salvar un gran número de bienes del Patrimonio Monumental. No sería hasta la crisis del Estado Liberal en los primeros decenios del siglo XX cuando podemos hablar de una verdadera ruptura del derecho privado del patrimonio histórico en el ordenamiento español, aunque podemos considerar que con la configuración del llamado Estado Nación especialmente en la etapa isabelina se va a ir dando los primeros pasos, aunque leves, de una limitación de los derechos privados sobre una selección limitada de bienes históricos-artísticos, aquellos que serían identificados con sus intereses axiológicos de carácter nacionalista.

---

<sup>1697</sup> DIAZ MORENO, Fernando “La consideración jurídico constitucional del Patrimonio Nacional”, *B.Anabad*, XXXIX, 1989, 1, pp.129-130.; la evolución constitucional del Patrimonio Nacional, *Reales Sitios*, 1989, Número Extraordinario, pp.15-30.

Ante este contexto jurídico-social podemos afirmar como el disfrute del Patrimonio Monumental no tendrá un carácter colectivo en el ámbito de los derechos sociales sino que se interpretara como un verdadero derecho patrimonial, cuyo gozo y disposición estará incertado exclusivamente en la esfera privada de su propietario. Si analizamos exhaustivamente el ordenamiento jurídico español de la etapa liberal podemos afirmar tajantemente la inexistencia de un verdadero corpus legislativo coherente que regulara en su conjunto la existencia de los problemas emergentes que requería una sociedad liberal. La mayor parte de la legislación decimonónica estaría centrada en la resolución de los intereses privados de la burguesía, especialmente en los ámbitos relacionados con los problemas jurídicos que conllevaba el derecho de la propiedad privada, la intervención administrativa limitada del Estado que no se opusiera a los intereses privados. El derecho constitucional decimonónico español no definiría en ningún caso la delimitación del patrimonio cultural, no de extrañar por otro lado en un Estado Liberal, al no identificarse como un derecho adherido a la persona individual ni a un ente social, en contraposición con el ordenamiento jurídico de un Estado Social y democrático de Derechos donde el derecho al patrimonio cultural está incorporado a este cúmulo de que los constitucionalistas llaman derechos sociales. La causa es clara ya que el patrimonio histórico en sus más amplias proyecciones forma parte de la esfera privada de los derechos, tanto en la posesión del derecho como en el goce del mismo, por lo que no se ha configurado todavía la conceptualización de un patrimonio de carácter público, tanto en la propiedad como en el goce de los mismos. Desde esta perspectiva podemos apreciar que tanto en las llamadas constituciones conservadoras como las progresistas que se fueron desarrollando a lo largo de evolución política de la España Liberal no encontramos ningunas directrices directas en los textos normativos.

El papel del propietario privado del Patrimonio Monumental iría cambiando muy lentamente en el caso español, siendo limitado paulatinamente por el Estado hasta convertirse en un custodio de los intereses públicos, en el ámbito contemporáneo. Alegre Avila lo va a sintetizar de esta manera: *El conjunto de limitaciones y restricciones que pesan sobre la propiedad histórica ha hallado distintas explicaciones de orden dogmático, explicaciones que han tratado de conjugar la esencia del derecho de la propiedad privada, en cuanto genérico derecho de goce y disposición, con las limitaciones que pesaban sobre los propietarios, y que se justifican, en razones de protección y conservación de bienes históricos(...). Así, en un primer momento se acudió a la doctrina de las limitaciones administrativas de la propiedad privada, doctrina que veía en el conjunto de deberes y limitaciones impuestos a los propietarios una serie de restricciones o constricciones del ordinario régimen de uso y disposición, justificada por razones de interés público y que en todo caso dejaban a salvo la esencia del derecho de la propiedad como facultad de libre utilización y disposición de los bienes sobre los que recaían. No obstante, esta explicación, una vez que las intervenciones administrativas sobre los bienes históricos*



*adquirieron progresivamente una mayor profundidad y extensión, no daban razón bastante acerca de la naturaleza de los derechos, públicos y privados, que recaían sobre esta peculiar propiedad. Y así, poniendo el acento cada vez más en la dimensión objetiva que dimanaba de los específicos caracteres de los bienes históricos, aun cuando sin olvidar en modo alguno el relevante papel que en todo caso corresponde al propietario privado en la consecución de los objetivos de tutela y protección pretendidos por el ordenamiento, se dirá que el propietario privado era una especie de ejerciente privado de funciones públicas, o bien, un custodio de interés público, resaltándose de este modo, cada vez con mayor intensidad, la dimensión de “función” o “interés” público que cumplen estos bienes, por encima de la perspectiva subjetiva del titular privado de derechos<sup>1698</sup>.*

No sería hasta la entrada en vigor de la llamada Constitución Cultural insertada en la Constitución de 1978, cuando se puede afirmar la existencia de un verdadero derecho subjetivo del ciudadano, especialmente en su artículo 44, en la que no solo se delimita la participación del mismo en la cultura, sino incluso se incluirá la funcionalidad social del patrimonio en el artículo 46, por lo que el acceso al mismo se convierte en un verdadero derecho<sup>1699</sup>. Siguiendo a Pérez Luño al admitir un derecho de participación en los bienes de la historia, el arte y la cultura, cabe conectarlo, de forma inmediata, con todas aquellas normas constitucionales dirigidas a garantizar el pleno desarrollo de la personalidad. Al mismo tiempo se halla relacionado con un modelo cualitativo de desarrollo cualitativo del sistema económico constitucional (...) en esta esfera mantiene un nexo de continuidad con el artículo 33.2, que delimita el contenido de la propiedad privada a través de su función social y finalmente conviene situar el artículo 46 en las coordenadas normativas constitucionales tendentes a preservar e impulsar la identidad histórico-artística y cultural de la Nación Española y de los pueblos que la integran<sup>1700</sup>. En la misma línea señala M<sup>a</sup> del Rosario Alonso apunta como la Constitución española reconoce al conjunto de los ciudadanos un interés colectivo que tiene por objeto el Patrimonio Histórico, el valor cultural de los objetos que lo integran. Lo que se postula es el disfrute por parte de los ciudadanos de esos valores culturales, el acceso al mismo. Giancarlo Rolla subraya como la obligación constitucional de tutelar el patrimonio histórico-artístico no es un fin en sí misma, sino que está

---

<sup>1698</sup> ALEGRE AVILA, Juan Manuel “El patrimonio histórico español: régimen jurídico de la propiedad histórica” en GUTIERREZ-CORTINES CORRAL, Cristina (ed.) *Desarrollo sostenible y patrimonio histórico y natural*, Tomo I, Fundación Marcelino Botín, Santander, 2002, p.205.

<sup>1699</sup> Cabe mencionar el análisis que hace Carlos López Bravo en su obra citada *El Patrimonio Cultural en el sistema de derechos fundamentales*, y los comentarios de TORRES DEL MORAL, Artículo 44, en *Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución española de 1978*. Tomo IV. Editorial Revista de Derecho Privado, Edersa, Madrid, 1984, p.210 sgs.

<sup>1700</sup> PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique Artículo 46 Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en ALZAGA, Oscar *Comentarios a la Constitución Española de 1978*, Tomo IV, Cortes Generales, Editoriales de derechos unidas, Madrid, 1996, pp.295-297.

encaminada instrumentalmente a conseguir el objetivo primordial de la Constitución Cultural: promover el desarrollo de la cultura<sup>1701</sup>.

•

#### **4.2.3.2. Las técnicas de policía administrativa de la tutela del Patrimonio Monumental.**

Como afirma Pedro Prieto *la limitación aparece como la más importante vía de penetración de la Administración en el ámbito del ejercicio de la propiedad, modulando a favor y beneficio del interés público, y por ende a su propia actividad. Parece claro que técnicamente al menos, el derecho administrativo tuvo amplias posibilidades de conformar durante el siglo XIX el derecho de propiedad privada en relación con el interés público, entendiendo por conformación la posibilidad jurídica de superar con arreglo a derecho el conflicto de interés plantados entre los del propietario y los de la Administración. Con este fin, a lo largo del siglo XIX, la Administración ostentó diversos títulos de penetración en el derecho de la propiedad privada. A través de la actividad de policía, la Administración pudo regular diversas manifestaciones del derecho de la propiedad privada, no ya con un fin general de orden público, de evitación de perjuicios o daños, sino con el fin de determinar en esos casos las exigencias del interés público*<sup>1702</sup>. Las técnicas de policía administrativa de la tutela del Patrimonio Monumental en el Estado Liberal serían:

- La declaración formal de Monumento Nacional como límite de los derechos patrimoniales.
- Los deberes de conservación del patrimonio inmobiliario monumental en el seno de la propiedad privada.
- La específica tutela pública del Patrimonio Arqueológico.
- El control de la exportación de los bienes muebles: la incorporación del derecho de retracto y tanteo en el ordenamiento jurídico liberal. Hacia un sistema sancionador del Patrimonio Cultural en el ámbito del interés privado.

***- La declaración del Bien de Interés Nacional como procedimiento administrativo de la tutela del Patrimonio Monumental como Bien Público.***

María Teresa Pérez de Acosta ya calificaba en las reflexiones doctrinales nacidas en el seno del anteproyecto de la Ley de 1985 de absurdo y contraproducente *la clasificación de los bienes muebles e inmuebles, y el inventario, referido a muebles, cuando en realidad la misma importancia y valor puede tener un inmueble que un ejemplar aislado de pintura. La*

<sup>1701</sup> ROLLA, 1989, pp.164-165.

<sup>1702</sup> ESCRIBANO COLLADO, Pedro *La propiedad privada urbana*, Editorial Montecorvo, 1979, pp.60-61.

*minusvaloración que se hace de los bienes muebles se aprecia en la exclusión del máximo rango legislativo que supondría su inclusión en el catálogo*<sup>1703</sup>. Un hecho que sin embargo, va a ser común en todas las legislaciones liberales, y con especial trascendencia en el ordenamiento jurídico español de esta etapa. La prioridad del tratamiento jurídico del bien inmueble sobre el mueble va a ser constante en la configuración de la tutela pública del Legado Monumental. En los decenios centrales del siglo XIX va a surgir, al igual que otros países europeos, un verdadero procedimiento administrativo, por el que se tutelaba aquellos bienes históricos-artísticos que respondiera a los intereses públicos que el propio Estado consideraba más idóneos: Nacía el denominado Bien de Interés Nacional, que se puede considerar, aunque con matices, el antecedente de la declaración de Bien de Interés Cultural recogido en la actual legislación española. Es tradición de nuestra doctrina Ramón Mateos Mateos precisa como *la calificación de un bien inmueble o conjunto de ellos como monumento histórico-artístico constituye el acto administrativo en virtud del cual se le someten al régimen especial de tutela y conservación establecido por las Leyes. Es pues, una decisión de notoria trascendencia en cuanto que identifica dichos bienes como monumentos nacionales, incluyéndoles en el sistema jurídico de este tipo de propiedad*. En cierta forma, la tesis de Mateos está fundamentada en la doctrina italiana del vínculo artístico, por la que se define una relación de naturaleza pública entre el particular y la Administración (Capaccioli). Aquellos bienes históricos-artísticos que fueron declarados bienes de interés nacional entrarían a formar parte de la propiedad pública del Estado, por lo que nuevamente nos encontramos con la cuestión de calificar jurídicamente a dicho bien en el ámbito de los derechos patrimoniales. Su inserción como propiedad pública, les añadía los caracteres propios de un dominio público como eran la imbagabilidad, insprescriptibilidad, etc., pero nunca fueron insertados en ningún ordenamiento como tales, por lo que nuevamente se estaba construyendo una naturaleza específica de una propiedad especial, cuyo régimen jurídico se diluía en un régimen específico tutelar estatal. Recogemos la tesis de Eduardo Roca: *No hay duda que la declaración de monumento es un acto administrativo, de naturaleza especial, que se concentra en una manifestación de voluntad de la Administración, que produce una situación jurídica específica en cuanto determina el status jurídico de un bien (...) Ahora bien, ¿es un acto administrativo constitutivo o simplemente constativo? Es decir, ¿es un acto que da lugar al nacimiento y configuración del instituto jurídico de propiedad monumental, o se limita simplemente a constatar la existencia de la institución y su formalización en el mundo del Derecho? (...) A nuestro juicio, no se trata de un acto administrativo de carácter constitutivo, en el sentido de crear ex nihilo una institución jurídica hasta ahora inexistente, sino que su valor es formal y declarativo en cuanto se produce la constatación de un supuesto que nace opes legis al reunir el bien las características o*

---

<sup>1703</sup> PEREZ DE ACOSTA, M<sup>a</sup> Teresa, “Consideraciones en torno al concepto y titularidad de los bienes que forma parte del Patrimonio Histórico-Artístico Español” *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Año CXXX, Enero, 1981, 1, Segunda Epoca, Tomo LXXXII, p.431.

*valores históricos o culturales que exige la Ley (...) Así pues, el acto administrativo no crea el instituto del Patrimonio artístico y cultural, sino que lo reconoce y regula su status jurídico, sino que lo reconoce y regula su status jurídico, individualizado y específico, aproximando esencialmente esta propiedad inmobiliaria privada al demanio, hasta el punto que podríamos afirmar, en pura construcción teórico-jurídica, que es una categoría especial de carácter demanial, por su afectación a un fin público y a una función social, mientras su titularidad se respeta en el ámbito dominical privado (...)*<sup>1704</sup>. Desde nuestra perspectiva la Declaración de un bien como Monumento se convierte en un instrumento vital de la propia Administración española, al igual que había ocurrido en otros sistemas normativos europeos, por el que mediante un acto formal de carácter administrativa se estaba delimitando una categoría jurídica, que derivaba en la delimitación de derechos y deberes de carácter tutelar, tanto a los particulares como al propio Estado, por lo que en principio era independiente de la titularidad del bien, aunque no cabe duda que aquellos bienes que se encontraba en el ámbito del dominio privado eran más dificultoso proceder a ser declarados como tales.

***- Los deberes de conservación del patrimonio inmobiliario monumental en el seno de la propiedad privada: La cuestión de la Restauración Inmobiliaria en la España Liberal.***

El análisis del profesor Luis Anguita sobre el derecho al goce de los propietarios privados sobre sus bienes culturales se incluye entre las obligaciones de hacer la obligación de conservar, mantener y custodiar tal como establece el actual artículo 36.1. de la LPHE, por lo que la obligación de conservar los bienes culturales se le impone a los propietarios, y a todos los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. Al igual que otros ordenamientos jurídicos nos encontramos con el problema terminológico del contenido legal de conservar, por lo que Anguita cree más factible que en vez de enunciar semánticamente lo que encierra el término sería conveniente que los tribunales lo resolviesen en cada caso. Sin embargo, el deber de conservación impuesto a los propietarios no va a ser una realidad hasta la promulgación del Real Decreto-Ley 9 de agosto de 1926, en sus artículos 10, 12 y 70, por lo que el propietario privado quedaba insertado en los deberes de conservación del inmueble categorizado de interés histórico-artístico. Una mayor intervención estatal aparece ya en los artículos 24 y 26 de la Ley de 1933 y en el artículo 23 del Reglamento de 1936. Un aspecto que va a seguir recalando las distintas sentencias que se van a decretar desde la llegada del Estado Constitucional es el respeto a la propiedad privada del bien inmueble que se quiere restaurar, como aparece manifestado en la STS de 6 de abril de 1992 en su FJ 3º: *Esta Sala viene reiteradamente declarando (...) que las atribuciones de los organismos protectores del Patrimonio Histórico Artístico*

<sup>1704</sup> ROCA Y ROCA, Eduardo, 1975, pp.35-37.

*obedecen a la exigencia de defender el derecho social a la cultura y ello obliga – conforme al art. 53.3 de la Constitución- a interpretar la legislación protectora de dicho patrimonio en el sentido más favorable a la conservación del mismo, en cumplimiento del mandato constitucional de conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran (art.46) y otorgar cobertura legal para impedir o demoler obras que pudieran producir daño a dicho patrimonio y perjuicios irreparables, y en consecuencias aquellos organismos pueden, separándose incluso, si ello fuera necesario, de las normas urbanísticas y de las licencias que se hubieran otorgado por otros organismos, adoptar o imponer las limitaciones que discrecionalmente estimen necesarios para tal fin, si bien el ejercicio de esa potestad ha de ser razonable y limitar los menos posibles los derechos de los propietarios afectados.*

Entre los deberes de la conservación se encontraría el de la restauración inmobiliaria de inmuebles históricos, convirtiéndose en la España Liberal en uno de los campos de batalla de la actuación administrativa, no tanto por los conflictos de intereses que se podrían producir con los intereses privados sino como con las técnicas restauradoras utilizadas en las mismas<sup>1705</sup>. Al igual que en otros países de su entorno, la actividad de la administración en el ámbito de la restauración de edificios públicos va a ser amplia, y de la misma manera se va a producir una amplia discrepancia en la manera de acometer tal restauración. Las primeras restauraciones se hacen a instancia de la Corona, concretamente en la Alhambra y el Alcázar de Sevilla, cuyo objetivo principal como señala Ordieres era reintegrar el monumento a su estado original, a su brillantez primitiva, en la que el poder evocador del monumento, valor máspreciado de un romántico, alcance su máxima expresión, por lo que la patina del tiempo, en estos primeros momentos de la restauración en nuestro país, carecerá de significado para los arquitectos y artistas llamados a restaurar. Una segunda etapa lo determinaría la impronta de las tesis contradictorias de Viollet-Le-Duc y Ruskin, siendo Torres Balbas en su artículo publicado en la revista Arquitectura en enero de 1933, se insertaría en las filas de este último, mientras que el arquitecto Velázquez Cobos lo haría con el arquitecto francés. Son los años en la que la restauración institucional se va a convertir en un punto de partida en la tutela jurídica del Patrimonio Monumental, aunque seguimos insistiendo, solamente en aquellos edificios que han sido formalmente declarados de interés nacional. Sería con la Real Orden del 4 de mayo de 1850 cuando se empieza realmente a prohibir cualquier obra en edificios públicos sin previa consulta a las Comisiones de Monumentos. En la segunda mitad del siglo XIX se fue promulgando nuevas normativas que intentaban solidapar las contraversias provocadas por la técnica restauradora

---

<sup>1705</sup> BARRANCO VELA, Rafael *El régimen jurídico de la Restauración en el Patrimonio Cultural. Un estudio comparado de los ordenamientos italiano y español*. Estudios sobre el Derecho a la Cultura y Régimen Jurídico del Patrimonio Cultural. Granada, 2008.

hasta que aparecería el Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1920<sup>1706</sup>. Esta cuestión no es ninguna novedad en el ordenamiento español, sino que por el contrario ha sido uno de los capítulos más trascendentales en el camino de la configuración del Patrimonio Histórico como bien jurídico. Una de las intervenciones administrativas sobre el inmueble privado en la etapa liberal fue la declaración de estado de ruinas de un inmueble, que podía culminar en la exigencia de la demolición del mismo<sup>1707</sup>. En el ámbito de la legislación liberal española, se va a ir delimitando especialmente con la expansión de los derechos urbanísticos la llamada declaración de ruinas en el ámbito del Patrimonio Monumental.

**- La tutela pública del Patrimonio Arqueológico.**

Uno de los triunfos primordiales de la legislación española del Patrimonio en la actualidad ha sido sin ninguna duda el calificar de dominio público los bienes arqueológicos, que al igual que en muchos ordenamientos europeos y americanos, le da un carácter específico diferente del resto de los bienes muebles e inmuebles que configuran el Legado Patrimonial. Con la promulgación de la Ley de 1985, en su artículo 44.1. se implaba el carácter dominal a todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propio del Patrimonio Histórico Español ya que sean descubiertos como consecuencias de excavaciones, remociones de tierra y obras de cualquier índole o azar. Siguiendo la normativa específica, tanto la jurisprudencia como la doctrina ha marcado esta línea demanial de los bienes arqueológicos, que en el caso de España, intenta paliar los amplios expolios que se han acometido sobre estos bienes a lo largo de la historia de los descubrimientos. Javier Barcelona Llop apunta que *si el dominio público es un producto del ordenamiento jurídico el artículo 44 de la Ley 16/1985 crea el dominio público arqueológico. Nótese que no es que algunos bienes arqueológicos sean dominiales por una u otra*

<sup>1706</sup> MUÑOZ MACHADO, Santiago *La resurrección de las ruinas (el caso del Teatro Romano de Sagunto)*. Cuadernos Civitas, Madrid, 2002. La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2000 que confirmó la ilegalidad de las obras de restauración del Teatro Romano de Sagunto, acordada primero por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ha sido seguramente, la decisión más importante en materia de restauración de monumentos históricos que se ha producido en España en todos los tiempos. Sin embargo, como enuncia el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, la actuación sobre los restos del teatro romano así como el jurídico fundamentada en la interpretación del artículo 39.2 de la LPHE va a ser ampliamente criticada

<sup>1707</sup> La declaración administrativa de edificio en estado de ruina tiene su precedente legislativo en las Partidas del rey Alfonso X, el sabio, con la ley 10 título 32, Partida III, cuando dice que el juzgador del lugar puede o debe mandar a los señores de aquellos edificios que lo enderecen o que los derriben (...). En la Novísima Recopilación seguiría las mismas disposiciones que las Partidas. Con la promulgación del artículo 389 del Código Civil de 1889, se impondría al propietario la obligación de reparar, y en caso de que no fuera posible la reparación, se procedía a la demolición. Al mismo tiempo una serie de disposiciones administrativas van a ir perfilando la intervención estatal en el inmueble privado, como fue el caso de la Orden del 24 de junio de 1876, por lo que los ayuntamientos podían disponer la demolición de los edificios particulares en todos sus pisos cuando las fachadas de aquellos se hallasen en ruinas. AGÜNDEZ FERNANDEZ; Antonio *La declaración administrativa de edificio en estado de ruina*. Editorial Comares, Granada, 1994, pp.7-9.



*razón, sino que los son a los que el precepto se refiere (...) por primera vez en nuestra historia jurídica, los bienes arqueológicos se dicen de dominio público(...)*<sup>1708</sup>. Antonio Roma Valdés delimita el carácter público de los bienes arqueológicos descubiertos en el ordenamiento español: *Se trata de un dominio público por naturaleza, esto es que, los bienes integrantes de cualquier yacimiento arqueológico (esté o no en excavación) son merecedores de esta protección, sin necesidad de un acto de ocupación, ni de declaración previa por parte de la Administración. Así, el subsuelo nacional, en la medida que encierre bienes susceptibles de aportar un conocimiento de nuestro pasado, contiene objetos que pertenecerán al dominio público una vez sean descubiertos. La afectación propia de todo dominio público se verá caracterizada por aquellos bienes que contenga información del pasado. Sobre esta base, los bienes arqueológicos presentan unas características con las minas, también de dominio público, en la medida en que es su propia naturaleza la que determina la configuración demanial. A modo de diferencia, las minas son susceptibles de aprovechamiento particular previa concesión, mientras que en el patrimonio arqueológico no se prevé la apropiación de los productos por los particulares, sino únicamente la utilización por parte de la Administración*<sup>1709</sup>.

Sin embargo, sería con la llegada del periodo liberal en España cuando se van a dar los primeros pasos a la hora de calificar como dominio público a los bienes arqueológicos. Los continuos expolios arqueológicos, la identificación de estos bienes como parte de la identidad nacional o los auspicios de un gran número de instancias privadas de carácter cultural y de grandes arqueólogos venidos del extranjero, insto al Estado a dar una respuesta tutelar promulgando un amplio número de normas cuya orientación culminara en la delimitación del Bien Arqueológico como Dominio Público, por lo que se insertaba en el problema trascendental común al resto del ordenamiento del Patrimonio Cultural, como era considerar dicho bien como un derecho inherente al propietario privado del mismo, bien fuera su descubridor o el dueño del fundo donde se hubiera encontrado el objeto en cuestión. La tutela jurídica va a estar delimitada por consiguiente por el derecho de la propiedad del bien jurídico a proteger, y tres sujetos van a jugar un papel primordial en el mismo, según las circunstancias que nos encontremos, ya que irá cambiando su

---

<sup>1708</sup> BARCELONA LLOP, Javier El dominio público arqueológico, *Revista de Administración Pública*, 151, enero-abril, 2000, p.137. *La Ley 16/1985 guarda silencio sobre el titular de los bienes arqueológicos descubiertos: A la noción de dominio público al uso entre nosotros es inherente la idea de titularidad pública. En nuestro Derecho, una concepción como la alemana de las cosas públicas carece, hoy por hoy, de aceptación, organizándose la teoría del dominio público sobre el dato de la titularidad pública del bien. Ello no quiere decir que el dominio público responda a una relación de propiedad, puesto que eso forma parte de otro debate, pero sí que una Administración pública se responsabiliza del bien, de su gestión tutela y defensa. Si hay dominio público hay titularidad pública; si no, habrá titularidad pública con un régimen jurídico diferente o titularidad privada, siquiera ésta venga condicionada por el ordenamiento jurídico si los bienes cumplen algún tipo de función pública. Y si hay un dominio público arqueológico, que lo hay, ha de haber también un titular del mismo. El problema es identificarlo, porque la Ley 16/1985 guarda al respecto un silencio sepulcral*, p.141.

<sup>1709</sup> ROMA VALDES, Antonio, *La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural*, Estudios de derecho penal y criminología, Editorial Comares, Granada, 2008, p.5.

calificación jurídica en función a la evolución que va a experimentar nuestra legislación hacia dotarlo de un carácter demanial:

1º) El Estado, por el que va a ir asumiendo paulatinamente un papel primordial para su la adquisición de los bienes descubiertos.

2º) El descubridor, que no tiene por que quedarse con el bien descubierto, sino que va a ser obligado a dárselo al Estado a cambio de una indemnización.

3º) El dueño del fundo privado, en el caso de que no se descubra en un terreno público, que va ir perdiendo el derecho absoluto a la propiedad privada del bien descubierto, a favor del Estado.

El papel predominante del Estado en la tutela jurídica que va a ir adquiriendo a lo largo de este proceso va a tener un hecho trascendental en la historia jurídica del Patrimonio Monumental Español, ya que es donde podemos afirmar que se va ir implantando la idea de una función social de la propiedad del bien arqueológico, que aunque se tutela más bien por el valor intrínseco que representa, la exaltación de la identidad nacional, que más allá de un simple derecho inherente al propietario. Sin ninguna duda podemos afirmar que se trata de un cambio de escenario jurídico que no lo encontramos en el resto de los bienes que configuran el Patrimonio Monumental. Un rápido repaso del ordenamiento jurídico dedicado al Patrimonio Arqueológico nos ratifica tal hecho. Ya en el Real Decreto de 16 de mayo de 1834 se estableció por primera vez que correspondería al Estado la mitad de los tesoros (...) ignorados u ocultos que se hallen en terrenos pertenecientes al Estado. Con la promulgación del Código Civil de 1889, se daría un paso fundamental referente a los hallazgos arqueológicos, ya aunque todavía se consideraba el tesoro oculto como un bien perteneciente al dueño del terreno en que se hallare, se presentaba como novedad el hecho de que cuando el descubrimiento se hiciera en propiedad ajena o del Estado, y por causalidad, la mitad se aplicara al descubridor, así como el propio Estado podría adquirirlo por justo precio si tuviera un amplio interés para las artes o las ciencias (artículo 351). Con la promulgación de la Ley de 7 de julio de 1911, de Excavaciones y Antigüedades, se daría una regulación específica al Patrimonio Arqueológico, en la que se delimitaba aun más el carácter demanial de los bienes hallados, al establecerse el derecho de hacer excavaciones en propiedades particulares, ya adquiriéndolas por expedientes de utilidad pública, ya indemnizando al propietario de los daños y perjuicios que la excavación ocasionase en su finca (art. 4), al mismo tiempo que se concedería la propiedad al Estado, a partir de la promulgación de la Ley, de las antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo o encontradas al demoler antiguos (art.5). La diferencia con la normativa anterior residía en que en el caso del Código Civil la adquisición de los bienes arqueológicos para el Estado era facultativa, mientras que a partir de este momento su adquisición fue necesaria.

La introducción de la expropiación forzosa en el ámbito de la tutela pública de los bienes de valor artístico e histórico en el ordenamiento español va a tener su génesis durante el periodo liberal, constituyendo un claro ejemplo de la introducción del principio de la funcionalidad social del Patrimonio Monumental en el ámbito de la crisis del Estado Liberal. La expropiación de bienes histórico-artístico partiría en nuestro ordenamiento del artículo 351 del Código Civil según el cual el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare. Si el descubrimiento se hubiera hecho en propiedad ajena, o del Estado, y casualmente la mitad se aplicará al descubridor; y si los efectos descubiertos fueran interesante para las ciencias o las artes podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se distribuirá en conformidad a lo declarado en esta preceptiva. La aplicación del principio de tesoro oculto tiene un claro precedente en el Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1868, en la que se establece dicha ocupación con la concesión al primer petionario de su explotación. En 1879 se promulgaría la Ley de Expropiación Forzosa en la que se regulaba con caracteres generales el procedimiento expropiatorio, aunque no incluiría procedimientos especiales por razón del objeto, abriría el camino a la posibilidad de incluir un derecho de tanteo y retracto por parte del Estado, derecho de tanteo que establecería la Ley de julio de 1911 en su artículo 9, el propio derecho de retracto. Al mismo tiempo se incluiría en dicha Ley un premio al descubridor de antigüedades hechas casualmente en el subsuelo o al demoler edificios antiguos por lo que recibiría del Estado al hacer entregas de estos efectos, como indemnización la mitad de la tasación legal de dichos objetos, correspondiendo la otra mitad al dueño del terreno en el supuesto de edificios ruinosos (art.5)<sup>1710</sup>.

***- El control de la exportación de los bienes muebles: la incorporación del derecho de retracto y tanteo en el ordenamiento jurídico liberal.***

Otro de los límites del derecho de disposición por parte de los particulares, sean individuos físicos o jurídicos, va a ser el control de exportación, que en principio rompía nuevamente la solidez absoluta del derecho de la propiedad privada. Y es que los límites de exportación de los bienes muebles de interés histórico y artístico se va a ir convirtiendo en una situación común en el ordenamiento español a lo largo de su historia, rigiendo un principio proteccionista que tratará de preservar el legado patrimonial en el propio suelo español, por lo que la permanencia de los bienes muebles e inmuebles va a ser la regla general que va a intentar establecer el legislador nacional desde la etapa liberal. Al mismo tiempo, se van a ir articulando los derechos de tanteo y retracto como prerrogativas a favor de la Administración

---

<sup>1710</sup> CASADO IGLESIAS, E. *Estudios de Derecho Administrativo*. II. Administración económica y planificación. Administración especial. Madrid, 1984, pp.120-124.

en el ordenamiento español en base a la tutela pública de los bienes históricos-artísticos pertenecientes al Patrimonio Monumental.

Evidentemente nos encontramos en el ámbito de la España Liberal con unas circunstancias sociales y políticas radicalmente distintas a la anterior, que podemos en dos bloques: La existencia de un amplio mercado artístico hacia el exterior, que en las etapas de conflictos bélicos se hacen incontrolables, y por otra la configuración de una administración tutelar que va ir adquiriendo una potestad de limitación en el ámbito del derecho de la propiedad privada de los bienes históricos-artísticos, pero que a su vez se va a encontrar con la limitación del derecho al libre mercado de productos, que ha roto con la política del monopolio comercial estatal, y que va a impedir que incluso en las actuaciones de compra-ventas no fraudulentas, los bienes históricos-artísticos puedan circular libremente sin ningún tipo de control estatal, al ser considerado bienes materiales inherentes al propietario. De ahí que se vaya delimitando un derecho de tanteo y retracto por parte del Estado, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, en un momento que se estaba perdiendo un gran número de bienes arqueológicos y de colecciones pictóricas de gran valía artística e histórica (en manos de la aristocracia y la Iglesia Católica fundamentalmente). En principio solamente se limitaban su exportación aquellos bienes que estuviesen catalogados e inventariados, por lo que un gran número de ellos quedaban excluidos de dicha protección, por lo que nuevamente nos encontramos con un tratamiento diferencial entre los que habían sido declarados administrativamente dignos de tutela pública y los que no.

El control de la exportación de bienes muebles e inmuebles y su inserción en el ordenamiento jurídico español decimonónico va a significar por consiguiente el diseño de superponer el interés general (en el caso del patrimonio monumental el llamado interés nacional) sobre los intereses privados de los propietarios, al considerarse que estos bienes históricos-artísticos, a pesar de estar situados en la esfera privada, se le reconocen ya un valor artístico e histórico, que va más allá de lo puramente particular. Los límites de exportación de obras de arte se convierte por consiguiente en un verdadero campo de batalla entre el Estado y los particulares a la hora de configurar un verdadero derecho público del Patrimonio Monumental, que ya en las disposiciones de los Borbones sobre exportación de bienes muebles de carácter artístico e histórico, a instancia de las respectivas academias, podemos contemplar en cierta manera algunos precedentes, y que se van a ir prolongándose durante los reinados de Fernando VII e Isabel II, especialmente a raíz de los amplios mercados fraudulentos que han ido apareciendo con las circunstancias bélicas adversas que va a vivir el país en estos años. Con la irrupción del periodo de la Restauración, el límite de la exportación de los bienes muebles e inmuebles se incrementa, pudiéndose afirmar que a principio del siglo XX, se habían incorporado ya los derechos de tanteo y retracto e

incluso la confiscación en caso de que los bienes muebles fueran a pasar de manera fraudulenta la frontera. Desgraciadamente en la práctica nuevamente las circunstancias políticas y administrativa vividas en la peculiaridad hispánica, impidió que muchas obras de arte se perdieran en colecciones extranjeras.

En base a las disposiciones normativas que se fueron promulgando en el ámbito liberal español sobre la prohibición de exportación de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Monumental, la Ley de 1985 ha continuado la misma tónica, al no autorizarse la exportación de los bienes declarados de interés cultural, en su artículo 5.1, así como la de aquellos otros que, por su pertenecía al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare expresamente inexportable, como medida cautelar hasta que se incoe el expediente para incluir el bien en algunas de las categorías de protección especial previstas en la Ley. Esta medida tendría como excepción la salida temporal de bienes muebles prevista en el artículo 31, y la posibilidad de permuta de bienes muebles de titularidad estatal concedida por el artículo 34 al Gobierno. Asimismo, en virtud del artículo 38 de la Ley de 1985 se ha incorporado los derechos de tanteo y retracto en el caso de exportación ilegal en el ámbito del ordenamiento español<sup>1711</sup>. En el artículo 26.2 se establece la obligación de notificar por parte del propietario que va a enajenar un bien mueble, aunque no esté inventariado, que como apunta Guillermo Orozco va cumplir una doble finalidad: *la transparencia al mercado del arte, por un lado, y posibilitar que la Administración conozca la existencia de bienes que pueda comportar un valor que aconseje su adquisición, por ello se afirma que no se trata de entorpecer el comercio con una amenaza potencial del ejercicio de tal derecho, sino de establecer mecanismos de protección eficaz para el Patrimonio Histórico*<sup>1712</sup>.

**- *Hacia un sistema sancionador del Patrimonio Cultural en el ámbito del interés privado.***

Una cuestión a tratar que va a pesar a la hora de configurar un verdadero ordenamiento tutelar del Patrimonio Monumental será su escasa delimitación como verdadero bien jurídico, ya que su tutela penal se fundamentará en base, como el resto de su articulación normativa, de los derechos patrimoniales, por lo que su protección privará el interés particular del bien a proteger que un verdadero interés general. Cristina Guisasola Lerma subraya este hecho en los siguientes términos: *La falta de atención que muestra el Derecho Penal hacia el patrimonio histórico encuentra su razón de ser, en la ideología liberal inspiradora de nuestros Códigos Civiles, concretamente en el*

---

<sup>1711</sup> CARRANCHO HERRERO, M<sup>a</sup> Teresa *La circulación de Bienes Culturales Muebles*, Universidad de Burgos, Editorial Dykinson, S.L. Madrid, 2001, pp.136-140.

<sup>1712</sup> OROZCO, Guillermo, 1996, p.91.

*individualismo característico de la mentalidad liberal con que se redactaron los códigos del siglo XIX. De ese modo, la legislación penal, en perfecta concordancia con el liberalismo, no solo ha contemplado nunca realmente una autentica protección sistemática y coherente de una protección de una propiedad comunitaria o colectiva, sino que además, la protección de la propiedad privada resultaba excesiva en comparación con la dedicada a otros bienes jurídicos, lo que se reflejaba en la dureza excesiva de las penas con que se conminaban los ataques a dicha propiedad*<sup>1713</sup>. De esta manera la tutela penal se hacía en base a una protección del Patrimonio Monumental como bien patrimonial que como un bien jurídico independiente y autónomo, por lo que en la línea defendida por Salinero Alonso<sup>1714</sup> o el propio Quintero Olivares solo podrían existir preceptos penales cuando alcanzase una identidad propia distinta al del propio propietario, por lo que los valores económicos que se estaba defendiendo en el régimen propio del particular tendrían que ser relegados a unos valores sociales y culturales en bien de la comunidad, que todavía en el régimen liberal no se va dar. La doctrina contemporánea española subrayaría en este sentido, en contraposición con el régimen liberal que el Patrimonio Cultural estaría inscrito en el fenómeno general de incorporación a la protección penal de intereses supraindividuales o colectivos que superan las tradicionales concepciones personalistas del bien jurídico, al referirse a derechos económicos y sociales, por lo que algunos autores como Gonzalez Rus, pondría de manifiesto la irrelevancia del consentimiento del titular dominical del bien en orden a las lesiones que sobre el mismo pudiese acontecer, al convertirse en un bien que cumple una función social y cultural. En esta línea cabe mencionar la tesis de María Alcañ Sánchez cuando afirma que todavía la doctrina criticaba la situación anterior a la aprobación del Código de 1995, *en la medida en que la protección de dicho patrimonio se encuentra diseminada a lo largo del texto punitivo, fundamentalmente como figura agravada de los delitos contra la propiedad, estimándose en esta fórmula sistemática prevalente el valor económico al propio valor cultural*<sup>1715</sup>, lectura que subraya la concepción patrimonialista del Patrimonio Monumental desde la perspectiva de la tutela penal en la España Liberal. A raíz de esta situación, el Patrimonio Monumental no fue delimitado como un bien jurídico propiamente dicho, ya que como señala la profesora Salinero Alonso, se partía de un sistema de tutela penal indirecta, sistema que prevalecía el interés individual sobre el colectivo, en la medida que se fundamentaba en un régimen privativo de los bienes artísticos.

Sin embargo, precisamente este va a ser el camino que va ir delimitándose a la hora de construir una protección penal en el ámbito del ordenamiento español, dejando atrás el concepto patrimonialista del bien a

<sup>1713</sup> GUIASOLA LERMA, Cristina *Delitos contra el Patrimonio Cultural: Artículos 321 al 324 del Código Penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p.40.

<sup>1714</sup> SALINERO ALONSO, C. 1997, p.183.

<sup>1715</sup> ALCALÁ SANCHEZ, María *Delitos urbanísticos*, Cedecs Derecho Penal, Barcelona, 1997, p.210.



proteger para insertarle un interés general en base a una función social (cultural) del mismo, en la que nuevamente se irá debilitándose la concepción jurídica del patrimonio histórico-artístico como bien inherente a su propietario. De esta manera se va a ir produciendo un sistema normativo de carácter sancionador, siendo en **el Código Penal de 1822** donde se trasluciría una tipificación penal sobre conductas delictivas sobre el Patrimonio Monumental, en este caso sobre bienes inmuebles, incluyéndose posteriormente en **los proyectos de 1830, 1831 y 1834**, a los que se uniría la tipificación de conductas delictivas que aparecerían en el Código Penal de 1848, de 1870 y finalmente de 1928. La lectura de sus articulados nos define la concepción patrimonialista de los bienes tipificados propia del contexto jurídico individualista vivida en estos años. En base a estos antecedentes legislativos del periodo liberal español, se ha incluido una protección penal en el ámbito del ordenamiento español contemporáneo, bien a nivel constitucional, concretamente en el mismo artículo 46 referente a la tutela pública del Patrimonio Cultural, que ordena *que la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio*, así como los artículos 321 al 324 del actual Código Penal. El tipo penal que aparece recogido en el artículo 321 del Código Penal de 1995, que tipifica como delitos el derribo o alteración grave de edificios singularmente protegidos, aparecería por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, haciéndose ya mención en el Proyecto del Código Penal de 1980. Sin embargo, en el ordenamiento liberal español esta tipificación no va a aparecer ya que hasta finales del siglo XIX era una práctica habitual la construcción previa destrucción, por lo que se destruía para integrar nuevos estilos, de forma que se producía una renovación de arquitecturas, unas sobre otras y unas contra otras. La falta de una verdadera concienciación patrimonial del bien inmueble como parte del Legado Patrimonial va a ser que desaparezcan una gran parte del Patrimonio Arquitectónico, por lo que el derribo se convierte en una práctica habitual que en un primer momento no va a estar ser objeto de tutela penal bien por la acción del propio Estado o de los propios particulares<sup>1716</sup>. No cabe duda que con las medidas desamortizadoras se derribarían un gran número de edificios o incluso se transformarían en orden a utilizarlos con una nueva funcionalidad social, por lo que no suscito una tutela penal del ordenamiento, aunque si provocaría una incipiente reacción administrativa sobre la tutela de algunos de estos inmuebles, que va a marcar una incipiente conciencia patrimonial que nos llevaría a la definitiva tipificación penal. la prevaricación de autoridades y funcionarios en relación con los daños al patrimonio histórico español (art.322), distinguiéndose los daños genéricos al propio patrimonio histórico español, como los que ocasionasen a archivo, registro, biblioteca, gabinete científico, bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, que serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a

---

<sup>1716</sup> GUIJAROLA LERMA, Cristina, 2001, p.423.

veinticuatro meses (art.323) y los daños que por imprudencia causara en cuantía superior a cincuenta mil pesetas, en un archivo, registro, biblioteca, gabinete científico, o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, que sería castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses (art.324)<sup>1717</sup>.

#### **4.2.4. Un incipiente derecho urbanístico en torno a la conservación del Patrimonio Histórico Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico.**

El triunfo de la función social de la propiedad en el ámbito del derecho urbanístico, especialmente en el derecho de conservación de los inmuebles ha sido resultado de un proceso muy complejo en el que se ha ido equilibrando los intereses del derecho de la propiedad privada con los del interés general promovida por la Administración. La publicación de la STS de 20 de enero de 1989, que estableció el deber de conservación por parte de los propietarios de los inmuebles, en este caso de los catalogados como bienes históricos-artísticos, por el que se equilibra la función social de la propiedad y el derecho de la propiedad privada: *el ordenamiento urbanístico configura el derecho de la propiedad como un conjunto no sólo de facultades sino también de deberes, uno de los cuales es precisamente, el de mantener los edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público*, y la STS de 21 de octubre de 1991 por la que incluye el deber de conservación como uno de los deberes básicos de toda propiedad inmobiliaria: La función social de la propiedad da lugar a que en su contenido se integren deberes como son los de mantener los edificios en condiciones de salubridad y ornatos públicos y de proceder a su demolición cuando concurren los supuestos de ruina vienen a ratificar dicha situación. Este deber de conservación del propietario privado se ha extendido al caso de aquellos bienes inmuebles inscritos clasificados como pertenecientes al Patrimonio Histórico-Artístico, incluida no solo en la legislación nacional, en el artículo de la Ley del Patrimonio sino en algunas leyes autonómicas, como la proyectada en el artículo 94 de la ley valenciana<sup>1718</sup>. Uno de los capítulos más importantes desarrollado por la legislación española en los últimos tiempos ha sido la declaración de ruinas, concretamente en el caso que nos concierne los que son catalogados como bienes históricos-artísticos, que ha sido objeto de una amplia regulación normativa tanto estatal como autonómica, al que se ha unido una rica jurisprudencia determinada por un amplio número de litigios derivados de la amplia problemática surgida de los deberes que se ha ido imponiendo al propietario privado, así como sus propios límites, en una clara

<sup>1717</sup> En los últimos años se ha ido produciendo un amplio número de estudios dedicados a la protección penal del Patrimonio Histórico-Artístico Español, entre los que destacan ALMELA VICH, C. Delitos sobre el Patrimonio Histórico *Actualidad Penal*, núm. 41, 6 al 12 de noviembre de 2000; ARIAS EIBE, Manuel José El Patrimonio Cultural. La nueva protección en los artículos 321 a 324 del Código Penal de **1995. Estudios de Derecho Penal, Editorial Comares, Granada, 2001**; GUIASOLA LERMA, Cristina Delitos contra el Patrimonio Cultural: Artículos 321 al 324 del Código Penal, *tirant lo Blanch, Valencia, 2001*.

<sup>1718</sup> RAMOS MEDRANO, Juan Antonio *Los deberes urbanísticos de los propietarios del suelo*, Madrid, 1996, pp.83-86.

referencia a la inclusión de la función social de la propiedad<sup>1719</sup>. La declaración de ruina se va a contemplar en el Decreto de 1924 por primera vez en el ordenamiento español<sup>1720</sup>. Esta situación jurídica del deber del propietario de conservar su bien inmueble no es nueva en el ordenamiento español, sino que se puede retrotraer hasta el propio derecho romano, asistiéndose en el periodo liberal a un amplio desarrollo. En el caso de los bienes inmuebles de carácter histórico-artístico, podemos establecer como precedente de la intervención administrativa el deber de ornato durante la segunda mitad del siglo XVIII, proyección de las ideas ilustradas del urbanismo, por el que se precisaba la configuración de las ciudades en función a una idea de armonía estética que pasaba por la conservación de los bienes que estuviesen en manos de los propietarios privados, siendo los ayuntamientos, a través de las ordenanzas municipales, los encargados de vigilar dicha actuación. El principio de ornato significaría sin ninguna duda la imposición de un estilo determinado, de un gusto oficialista por parte del Estado, pero al mismo tiempo resquebrajaría el sólido derecho de la propiedad privada que iba surcándose a finales del siglo XVIII. **La Real Orden de 11 de enero de 1808** sobre el control en plazas y lugares públicos aparecería con el objeto del embellecimiento de la ciudad.

Con la llegada del Estado Liberal, en el caso español, los distintos ordenamientos urbanísticos promovidos por las oligarquías locales siguieron imponiendo el deber de ornato en todo tipo de inmueble, más por un valor ideológico de resalte de la propia identidad histórica de las poblaciones, que por motivos de recuperación científica<sup>1721</sup>. **La Orden de 14 de septiembre de 1850** sobre el control de las ornamentaciones e intervenciones en edificios del Estado podría ser un ejemplo de ello. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XIX, un nuevo deber urbanístico se fue abriendo paso hasta su judicialización, el deber de la higiene, que va a constituir un nuevo campo de batalla entre los propietarios privados y los intereses generales promovidos por la Administración, que supuso en muchos momentos una verdadera destrucción patrimonial, al ser derribados sin ningún tipo de tapujos murallas, acueductos, e incluso amplios barrios históricos. A ello no cabe duda que habría que unir la especulación urbanística promovida por los mismos ayuntamientos que supuso

---

<sup>1719</sup> AGUNDEZ FERNANDEZ, Antonio, 1994, pp.133-152.

<sup>1720</sup> QUINTANA LOPEZ, TOMÁS, *Declaración de ruina y protección del patrimonio histórico inmobiliario*, Colección jurisprudencia práctica, tecnos, Madrid, 1991, p.9.

<sup>1721</sup> El principio estético sigue estando recogido en el ordenamiento contemporáneo español, como lo podemos apreciar en el artículo 246 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992, que establecía al respecto que *los ayuntamientos y los organismos competentes podrán también ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y de reformas en fachadas o espacios visibles en la vía pública, sin que estén previamente incluidas en plan alguno de ordenación*, añadiendo que en las obras en cuestión se ejecutará a costa de los propietarios si se contuvieren en el límite del deber de conservación que les corresponde y con cargos a fondos de la Entidad que lo ordene cuando lo rebase para obtener mejoras de interés general. FERNANDEZ, Tomás-Ramón *Manuel de Derecho Urbanístico*, Publicaciones Abella, El Consultor, Madrid, 2000, p.193.

las medidas desamortizadoras, la apertura de nuevas vías de comunicación, como ensanches y alineaciones, o el derribo de edificios históricos, por el que se moldeaba en función de sus intereses el derecho de conservación del patrimonio inmobiliario, que paradójicamente despertó un movimiento de rechazo, aunque tardó si lo comparamos con otras realidades europeas, en la que desde sectores intelectuales (arquitectos, académicos de bellas artes y de la historia, teóricos urbanísticos, etc.) denunciaron los estragos que la piqueta demoledora no solamente en los inmuebles históricos, sino en los propios espacios urbanísticos, lo que supuso la aparición de una legislación protectora, aunque tardía, ya a principios del siglo XX, lo que dio lugar a una pérdida considerable de obras de arte. La promulgación de la ley de 1924, y la declaración de la ciudad de Córdoba como espacio urbanístico protegible abrió sin ninguna duda una nueva expectativa en la conservación de los bienes inmuebles históricos de nuestro país<sup>1722</sup>. Sin embargo, el respeto del derecho de la propiedad privada nuevamente se convertiría en un límite de actuación, que no se resquebrajaría definitivamente hasta la legislación republicana.

#### **4.2.5. La intervención del Estado en la tutela del Patrimonio Monumental.**

##### **4.2.5.1. La configuración de una institucionalización administrativa de tutela pública del Patrimonio Monumental.**

A la hora de cuestionarnos sobre la existencia de una institucionalización administrativa del Patrimonio Monumental en la España Liberal lo primero que cabe cuestionarse sobre la propia Administración del Estado. La concepción decimonónica de la Administración en España está contenida en la siguiente definición que nos deja Royo Villanova en su tratado de Derecho Administrativo: *La Administración no es una parte del Estado sino un acto suyo que a todo él se refiere, puesto que el problema de los fines del Estado a todo él afecta y no a uno solo de los poderes. A lo que añadiría la relación entre Estado, Constitución y Administración es la misma que entre el ser, su organismo y el cumplimiento de sus fines*. En las primeras décadas del siglo XX, el Estado no sólo producirá actos jurídicos cuando realizaba sus fines mediante una administración que subjetivamente rebasaba los límites del poder ejecutivo. A principios del siglo XX, la asunción por el Estado-Providencia de nuevas competencias relativas a la satisfacción de necesidades sociales supuso un salto cualitativo de la función administrativa, identificada con el cumplimiento de los fines estatales. Hay que distinguir en el ámbito de la institucionalización administrativa del Patrimonio Monumental entre una Administración-Tutelar de los Bienes Históricos-Artísticos en aras a la promoción de la cultura con el fin de que participen todos los ciudadanos y aquella Administración-Tutelar propio de un Estado Policía en que más que la participación, limitaba en cierta forma la acción negligente que podía dar como

<sup>1722</sup> No cabe duda que la concepción urbanística de interés histórico nacido al amparo de la legislación liberal va a ser en cierta manera el precedente de la categoría jurídica de los conjuntos históricos, recogido en el artículo 20 de la Ley de 25 de junio de 1985.

resultado la pérdida de aquel patrimonio histórico-artístico, que el Estado consideraba que había que proteger y conservar. El primer modelo, propio de un Estado Social y Democrático de Derechos no se pondría en práctica en el ordenamiento español hasta la llegada del constitucionalismo democrático, concretamente con la promulgación de la Ley de 1986, aunque ya podemos observar cómo desde el Estatuto de 1926 se están poniendo las bases para la regulación de una Administración Patrimonial de connotaciones sociales, sin dejar de tener presente las carestías propias del momento, que se proyectarían a toda la Administración en general. Por el contrario, podemos afirmar la existencia homogénea de una Administración Tutelar con fines de policía administrativa desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta los primeros decenios del siglo XX, en la que se limitaba a prohibir acciones lectivas y en cierta manera no existían políticas de fomentos o ayudas necesarias que hubiera supuesto un mejor funcionamiento en el ámbito de la tutela patrimonial.

No cabe duda que la impronta de la administración francesa en el ámbito de la tutela monumental va a ser determinante desde la génesis del ordenamiento jurídico contemporáneo en España. Ya desde la segunda mitad del siglo XVIII, podemos contemplar como las instituciones que va a crear la Monarquía a la hora de conservar el Patrimonio Monumental van a ser las Academias de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, con un modelo institucional a instancia de las academias borbónicas nacida bajo la tutela de los Borbones. El modelo posrevolucionario francés fundamentado en los Inspectores de Antigüedades y las Comisiones de Monumentos van a llenar el espacio organizativo de la institucionalización hispana durante todo el siglo XIX, así como la potestad político-administrativa que van a ir asumiendo en el ámbito local los ayuntamientos y las diputaciones, siguiendo en este sentido el modelo bonapartista, sustituyendo al mismo tiempo las funciones que los regidores reales habían ostentado en la etapa napoleónica. Una de las contribuciones primordiales en el ámbito administrativo francés fue la elaboración de los inventarios y catálogos que se convertiría en una verdadera obsesión en el ámbito de la administración española, pero que no cabe duda no llegó a cuajar definitivamente hasta principios del siglo XX. La consideración de la existencia de instituciones culturales al servicio del pueblo, nacida al amparo de la administración francesa, sería importada por España a raíz del ensayo que supuso el llamado museo josefino, que posteriormente desencadenaría el origen del Museo del Prado, a pesar de que ya desde la etapa de Carlos III se hicieron algunos intentos frustrados, siguiendo los modelos que los Borbones franceses ya habían iniciado en el palacio del Louvre. En una misma línea podríamos añadir aquí la configuración de los Archivos y Bibliotecas Nacionales.

¿Cuáles son las dificultades primordiales que va a encontrar la Administración Tutelar del Patrimonio Monumental? De ineficacia organizativa podemos definir la cuestión administrativa del Patrimonio Monumental en la España Liberal. La ineficacia en la acción vendrá dada por múltiples factores que se irán incrementando a lo largo del periodo, especialmente a la hora de coordinarse las instituciones responsables de la conservación y el mantenimiento. Desde esta perspectiva, asistimos a las confrontaciones que van a surgir entre las Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia desde su origen por motivos de competencias, al considerar una controversias en los valores patrimoniales que aparezcan insertados en el bien a proteger, intentando que prevalezca lo histórico frente a lo artístico o viceversa, con el fin de obtener la tutela sobre el mismo; confrontaciones entre las instituciones que podríamos denominar estatales (Academias, Comisión Nacional de Monumentos, Ministerio de Instrucción Pública) y los de los ámbitos locales (Ayuntamientos, Comisiones provinciales, Academias de Bellas Artes locales), al confrontarse intereses particulares; la acción de los particulares contra la administración que los consideraban unos entrometidos en los asuntos del lugar; la pericia de los mercaderes fraudulentos del tráfico irregular de bienes históricos-artísticos que intentan superar la acción administrativa...

La inexistencia de un personal administrativo específico que se hiciera cargo del Patrimonio Monumental en la España Liberal va a ser otro de los problemas específico de su administración. La lentitud de la profesionalización científica de la historia del arte, las ciencias históricas o la arqueología en la formación académica de las universidades españolas va a influir sin ninguna duda a la hora de elaborar un inventario de carácter científico. La problemática se incrementaba aun más en los centros rurales o en ciudades menores, donde podía existir una amplia riqueza artística o arqueológica, y no existía un personal cualificado para este fin. No cabe duda que frente a esta situación crítica, paralelamente va ir naciendo una serie de círculos intelectuales, académicos, amantes de las antigüedades, que se convertirán en los verdaderos paladines de la defensa monumental, y que en muchos momentos al alzar su voz, podrán salvar gran número de bienes artísticos e históricos. No cabe duda la gran actividad que realizaron los miembros del Gabinete de Antigüedad de la Academia de la Historia, que en muchos momentos se convirtieron en el único personal administrativo de defensa del patrimonio arqueológico. La falta de presupuesto económico trunca en un gran número de ocasiones la actividad administrativa que va a llevar a la Administración a una verdadera paralización en su actuación, especialmente en los momentos de conflictos bélicos, que tan frecuentemente padeció el periodo liberal. La carencia de inventario y catálogos monumentales, la imposibilidad de excavar yacimientos arqueológicos, que constaban su existencia e incluso su localización, la sistematización de investigaciones del Patrimonio Monumental, etc., no se



llegaron a realizar en muchas ocasiones por falta de fondos públicos. A esta situación cabría añadir que fueron la mayoría de las veces instituciones privadas, personalidades individualidades, en gran parte extranjeros, como Bonson, Hullington, etc, los que promovieron gran parte de las investigaciones desde finales del siglo XIX, no por una simple afán coleccionista, sino por el contrario, por la sensibilización por el mundo artístico español, que les llevaría a invertir grandes sumas de dinero. Desde la etapa borbónica se había ido la fórmula de la iniciativa privada bajo la tutela regia, por lo que el descubridor podía quedarse con , práctica que se incrementó en el Estado Liberal, y que sin duda alguna se convirtió en un verdadero incentivo a la hora de paliar la laguna técnica de los fondos económicos públicos. La acción de la Administración se va a encontrar con un límite primordial a lo largo de todo este periodo: el derecho de la propiedad privada.

Las Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia nacerían en el seno de la Administración Borbónica, e iría asumiendo un amplio protagonismo durante todo el siglo XIX hasta que la ley de 1931 las convierte en unos órganos consultivos. A la hora de hacer un balance sobre su actuación como instrumento de la Administración podemos afirmar que en muchos momentos fueron los únicos órganos que en cierta forma actuaron como protectoras del Patrimonio Monumental, aunque evidentemente en muchos momentos sus actuaciones no dieron su fruto. El nombramiento de los Inspectores de Antigüedades habrá que contemplarlo como el germen de un verdadero personal administrativo de la Propiedad Monumental, que nacerían en la etapa isabelina, a los que se unirían las Comisiones de Monumentos.

#### **4.2.5.2. Las medidas de fomento en la tutela pública del Patrimonio Monumental.**

Al mismo tiempo que se van definiendo las técnicas de policía administrativa sobre la propiedad privada se van a ir insertando las llamadas medidas de fomento en el ámbito de la tutela pública de los bienes históricos-artísticos en la esfera privada. Jordana de Pozas ya definiría al fomento como *una vía media entre la inhibición y el intervencionismo del Estado*, por el que se pretende *conciliar la libertad con el bien común mediante la influencia indirecta sobre la voluntad del individuo* por lo que la acción de la Administración se traduce en *proteger y promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general sin usar de la coacción ni crear servicios públicos*<sup>1723</sup>. Los medios de fomento se caracterizarían por su flexibilidad, convirtiéndose en un verdadero incentivo a la hora de actuar los sujetos privados sobre sus bienes sin contraponerse a los intereses generales de

---

<sup>1723</sup> JORDANA DE POZAS, Luis “Ensayo de una teoría de fomento en el Derecho administrativo” en *Revista de Estudios Políticos*, 48, 1949, p.46.

la comunidad. Las medidas de fomento se fueron insertando paulatinamente en el ordenamiento jurídico del Patrimonio Monumental al quedar limitado una intervención directa en el seno de la propiedad privada, por lo que en muchos casos se convirtió en la única acción posible de protección pública del Patrimonio Monumental al estimular al propietario privado en la conservación del bien que había quedado en su poder, por lo que dieron como resultado la participación de un gran número de particulares e instituciones privadas en la gestación de una verdadera política de protección del Patrimonio Monumental. Concepción Barrero Rodríguez ha puntualizado como en los artículos 4.1 y 4.2 de la Ley de 1911 y la ley 4 de 1915, aparece insertada el fomento como base de actuación de los poderes públicos en la tutela del Patrimonio Monumental<sup>1724</sup>, que en cierta manera estaría anticipándose a las medidas de fomento parafiscales y fiscales que tendrá como fundamento la exposición de Motivos de la Ley del 25 de junio de 1985, en la que se incita al fomento como instrumento vital en el ámbito del ordenamiento jurídico del Patrimonio Monumental, al considerar que la tutela pública *no debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen su conservación y en consecuencia permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento*<sup>1725</sup>.

#### **4.2.5.3. Inventario y Catalogación en el ámbito del Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en la España Liberal.**

La declaración formal del Monumento Histórico-Artístico va a ser determinante para su tutela jurídica pública, por lo que se van a ir confeccionando en el seno del Estado Liberal una serie de catálogos e inventarios, especialmente en el ámbito de los bienes inmuebles, por lo que reducía al mismo tiempo un gran número de bienes que por dificultades técnicas y especialmente por haber estado en el ámbito de la esfera privada quedaría fuera del ámbito de acción pública tutelar. M<sup>a</sup> Rosario Alonso Ibáñez puntualiza como *en España, el deseo de contar con este tipo de inventarios ha venido marcando y condicionando la política de protección del rico legado artístico nacional durante los dos últimos siglos, siendo numerosas las disposiciones legislativas que ya desde 1802 se ha venido promulgando con vistas a avanzar en un proceso que se ha demostrado complejo y cambiante según se iban produciendo desde la inicial valoración en exclusiva de los elementos con interés artístico e histórico (...) el legislador sectorial, que ha ordenado a la Administración pública formar inventarios y catálogos constantemente, no siempre lo ha hecho con el mismo alcance desde el punto de vista jurídico. Su utilización va a ser indiscriminada, sin mayor rigor, y en la mayoría de las ocasiones, con deplorable técnicas legislativas, introduciéndose de esta manera en nuestro ordenamiento un claro factor de*

<sup>1724</sup> BARRERO RODRIGUEZ, Concepción, 1990, pp.666-667.

<sup>1725</sup> BENITEZ DE LUGO, Félix, 2005, pp.512-679.

*inseguridad jurídica*<sup>1726</sup>. En la sentencia de 11 de febrero de 1967 del Tribunal Supremo se incluye el recorrido que la labor de catalogación e inventario se fue realizando a raíz de la crisis del Estado Liberal: *Que consecuencia, como queda expuesto, de la calificación de Monumento y de su declaración a efectos históricos-artísticos, es su obligada inclusión en los Catálogos o Inventarios que a tal efecto se ha venido ordenando por el Estado español desde el año 1865 y sucesivamente por los Reales Decretos de 14 de febrero de 1922, 9 de agosto de 1926, en la que se daba un plazo de tres meses para la formación de la relación de Monumentos existentes en las respectivas demarcaciones, orden que fue reiterada por Decreto de 30 de mayo de 1930 (...)*. Con estas disposiciones quedaban atrás los intentos de catalogación frustrados que se habían ensayados desde la promulgación de la Instrucción del 26 de mayo de 1802, a las que se unirían la labor que las distintas comisiones artísticas y culturales de cada provincia en 1835 intentaron hacer con los bienes conventuales desamortizados, al igual que ya a principio del siglo XX, que la sentencia no cita, la promulgación de los Reales Decretos de 1 de junio de 1900 y 4 de febrero de 1902 en la que se establecía la obligación de elaborar el Catálogo Monumental y Artístico de la Nación.

#### **4.2.5.4. La configuración inicial de los servicios públicos en la España Liberal: La institucionalización del museo público, Biblioteca Pública y los Archivos Nacionales.**

¿Qué es un museo en el ámbito de la España Liberal? Responder esta cuestión es una tarea ardua, al quedar diluido tanto el contenido semántico como la concepción jurídica que se encierra en el término, por lo que nos volvemos a encontrar al igual que ocurría con los propios bienes histórico-artístico con un sentido impreciso, que en cierta manera en la actualidad la legislación española, al igual que gran parte de las normativas internacionales no ha resuelto la cuestión. Si recogemos algunas definiciones planteada por la doctrina a la luz de la amplia normativa existente sobre la materia, podríamos citar la de Lluís Peñuelas i Reixach, quien define como museo *aquellas entidades de carácter permanente, abierta al público, que adquiere, documenta, investiga, difunde y expone al público bienes culturales con fines de estudio, educación y recreo*, por lo que encierra una serie de caracteres que escapa en gran medida a la realidad jurídica del museo en el ámbito español del periodo que analizamos. La tutela de los bienes depositados en los museos va a situar el objeto primordial de los distintos sistemas normativos que se van a ir diseñando desde la creación de los Museos Provinciales bajo los auspicios de las Comisiones Provinciales de Monumentos a partir de la década de los 40. La cuestión que se nos plantea parece tener una respuesta clara: los bienes que forman parte de las colecciones de los museos públicos se considerarían desde un primer momento como bienes nacionales, por lo que su régimen estaría

---

<sup>1726</sup> ALONSO IBAÑEZ, M<sup>a</sup> Rosario, 2005, pp.25-26.

cercano al de los bienes dominiales de la Administración Pública. ¿Se podría considerar al museo de titularidad pública como un servicio público en el ámbito del Estado Liberal? ¿Es un mero depósito de obras de arte? No cabe duda que va a existir un primer esbozo de lo que vamos a llamar la funcionalidad social (cultural) de la práctica museística, que aunque surgen en un primer momento como meros depositarios de aquellos bienes históricos-artísticos que han despojados de las clases estamentales a raíz de las medidas desamortizadoras, a modo de ensayo conservacionista, su identidad irá cambiado en cierta forma en la medida que irá a fundamentar el carácter nacionalista que va a definir toda la política cultural del Estado, por lo que se expondrá aquellos bienes históricos-artísticos que se identifique con una burguesía con ansia de llenar el vacío cultural que ha dejado la descomposición del Antiguo Régimen, aunque en España lo encontremos en menor medida por su peculiar evolución histórica.

En la historia de la museografía española no se ha abordado aún con gran profusión la evolución de su titularidad jurídica (cabe mencionar el importante trabajo de María Bolaño) especialmente en el caso que nos ocupa, que sería la impronta de los derechos patrimoniales en la gestión de los museos que van a nacer en este periodo. En una mirada rápida a modo de síntesis se puede afirmar que durante la etapa liberal en España se fue perfilando la llamada tutela pública de los Museos, aunque si lo comparamos con el contexto internacional del periodo, se puede apreciar un claro retraso cronológico, especialmente por la impronta que el derecho de la propiedad privada va a tener en su configuración en este primer momento. Aunque la mayor parte de los bienes ubicados en las colecciones públicas de los Museos de la etapa liberal española saldrían de la expropiación de los bienes conventuales y del antiguo patrimonio real, no cabe duda que el Estado fue adquiriendo algunas colecciones de bienes especialmente del patrimonio arqueológico que les hizo comportarse como un propietario más, aunque incrementando sus prerrogativas administrativas frente a los intereses particulares de los coleccionistas privados. La funcionalidad social (cultural) de los museos públicos, sin embargo no aparece perfilado como en la museografía contemporánea, sino que cabe precisarlos como meros depósitos de bienes que por su interés nacional han sido protegidos y conservarlos, como exhibición de valores nacionales que fundamente la identidad del Estado constituido por la clase liberal, en cierta manera con el mismo matiz ideológico que se había utilizado en el coleccionismo regio a la hora de exaltar las glorias de la Monarquía Hispánica, para que fueran admiradas por los súbditos. Las dificultades técnicas y económicas, las carencias expositivas, y en muchos momentos a la dejadez de la propia Administración tutelar de los recién creados museos dificultaron enormemente la aparición de una verdadera museografía en términos modernos.

La evolución de la titularidad jurídica en el caso de la historia museográfica española podemos establecer los periodos siguientes:

1º) La apertura pública de las colecciones reales desde la segunda mitad del siglo XVIII siguiendo el espíritu de la Ilustración de difundir las riquezas artísticas e históricas que aparecen imbuidas en el seno de los bienes adquiridos por la Monarquía a lo largo de su historia. La titularidad de estos bienes será del propio Monarca, en la mayoría de los casos como bienes vinculados a su propia persona, que se comporta desde esta perspectiva como un particular. De esta manera desde los reinados de Carlos III y Carlos IV se va a perfilando una política de apertura de las colecciones reales a los súbditos de la nación.

2º) La irrupción de los principios revolucionarios franceses, bien por la propia invasión territorial del país vecino, bien insertado en la ideología de algunos eruditos de la época, van a ir abriendo el camino a la concepción pública del Museo, cuya titularidad no será ya el Monarca, sino que el verdadero propietario se identificará con la Nación, persona jurídico-política que encarna el nuevo orden constitucional. La configuración del Museo Josefino y los primeros pasos de la fundación del Museo del Prado son ejemplos claros de la nueva etapa de la titularidad pública del Museo en España.

3º) Sin duda alguna podemos afirmar que el verdadero triunfo de la titularidad pública en España en el ámbito museístico va a surgir en la etapa de las Regencias, y posteriormente durante la etapa isabelina y la propia Regencia. En una primera fase, serán las medidas proteccionistas sobre los bienes históricos-artísticos que habían pertenecidos a las órdenes religiosas la que va a configurar definitivamente la idea de un museo público, cuyos bienes forman parte de la propiedad del Estado y cuya gestión se hará cargo de una administración insertada en el organigrama gubernamental, que provocará la existencia de una amplia red de museos provinciales por toda la geografía española. La historia jurídica del Museo del Prado durante este largo periodo, por otra parte, constituye un claro ejemplo de transformación jurídica de las antiguas colecciones reales en propiedad nacional.

En el periodo liberal existieron una amplia gama de iniciativas desde instancias privadas para proteger los bienes del Patrimonio Histórico-Artístico que conllevaron al surgimiento de los llamados museos de titularidad privada, que se introduce con personalidad jurídica propia en la historia de la museografía española, y que sin duda alguna contribuyeron a la divulgación y conocimiento de un amplio bagaje cultural del patrimonio hispano. Paradójicamente fueron primordialmente eruditos extranjeros los que abrieron el camino al surgimiento de los museos de titularidad privada, quienes seguirían posteriormente la alta burguesía del incipiente capitalismo español, los que se prestarían a la constitución de museos privados. No cabe duda que la

primacía del derecho privado en la España Liberal limitó la acción intervencionista de la Administración en las colecciones privadas que fueron configurándose en Museo Privado, en su mayor caso bienes de propiedad de persona física, que con el paso del tiempo se irían delimitándose en fundaciones. ¿Hasta qué punto va a existir una libertad absoluta por el propietario de una colección particular para venderlo, exportarlo o incluso cederlo en el ámbito liberal español?. Al igual que ocurriría con el coleccionismo público español, la función social (cultural) de los bienes expuestos en los museos privados del Patrimonio Monumental no van a tener el mismo matiz que en el ámbito contemporáneo, ya que en muchos casos el objetivo primordial era la exaltación de la labor de sus propietarios (la mayor parte burgueses adinerados), aunque no por ello hay que eludir algunas excepciones, que posteriormente han sido criticado.

La Iglesia Católica ha ido promoviendo en España una amplia gama de red de museos diocesanos, que tuvieron como génesis la etapa del periodo liberal, concretamente durante la Restauración. En la regulación actual, Llinares aclara como *a efecto del ordenamiento jurídico español dichos bienes tienen la condición de bienes de naturaleza privada, siendo su titular la Iglesia Católica, institución que se reconoce personalidad jurídica propia y que se rige internamente por sus propias reglas, especialmente por el Código Canónico (...) No obstante, tener la condición de bienes de titularidad privada las leyes españolas, y en particular la LPHE, han establecido un régimen especial para las piezas artísticas, individuales o en colección en poder de la Iglesia Católica, creando una severa diferencia con respecto al régimen común aplicable a los museos y colecciones privadas. Consisten estas diferencias en importantes limitaciones que el Estado impone sobre la libre disposición de estos bienes, especialmente en lo referido a la exhibición, exportación, traslados y enajenación de los mismos. En un aspecto la legislación española interviene incisivamente en el régimen de propiedad de los bienes artísticos de titularidad eclesiástica: es en lo referido para disponer de ellos libremente cuando estén declarados de interés cultural, catalogados o inventariados*<sup>1727</sup>, como aparece regulado en el artículo 28.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985.

La génesis de los museos diocesanos en el ámbito español se dio más tardíamente que en otros países de nuestro ámbito cultural, teniendo un claro precedente en la etapa de la Restauración, que en la mayoría de los casos se convirtieron en depósitos de obras pertenecientes a la Iglesia como personalidad jurídica tutelar de las mismas, siendo especialmente los cabildos catedralicios o la propio Diócesis Arzobispal los promotores de los mismos. Su régimen patrimonial de bienes pertenecientes a un ente privado no impidió que desde el propio Estado comenzara a intervenir algunas de estos bienes, especialmente en los aspectos de la venta o exportación de dichos bienes, que en cierta manera presidio la tónica que había definido para la política tutelar de

<sup>1727</sup> LLINARES I GOMEZ, J. 2008, p.169.



todos los bienes eclesiásticos en general. La función social (cultural) de los bienes pertenecientes a los museos diocesanos quedaría diluida en la mayoría de los casos como bienes de exaltación de los valores espirituales que en un primer momento fueron realizados, e incluso como instrumento divulgador de la importancia que la Iglesia seguía teniendo en el ámbito español, que durante en los últimos decenios del siglo XIX, lucharía por todos los medios para seguir teniendo una presencia material en el seno de la sociedad española liberal. Cabe añadir que el Estado le interesaría de los bienes pertenecientes a los museos eclesiásticos aquellos que respondieran a un fundamento claramente nacionalista.

Archivos Nacionales. En la configuración de la concepción jurídica del Archivo español durante el periodo liberal se fundamentaría como en el resto de los bienes históricos-artísticos en los derechos patrimoniales, por lo que su régimen tutelar dependía de quien era el propietario, por lo que en principio la tutela pública quedaba exenta en los archivos privados. En la actualidad este régimen ha sido superado con la promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico-Artístico al considerar integrante del patrimonio documental, *además de los archivos de las administraciones públicas, los documentos con antigüedad superior a los cuarenta años, generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso, y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales de carácter privado*. Como apunta Romero Tallafigo, la consecuencia de esta patrimonialización nacional, que no entra a definir titularidades, hace que sea permitido su acceso a los investigadores particulares, siempre que no suponga una intromisión en el derecho a la intimidad. Por lo que en principio se diseñaría una titularidad pública, independientemente quien fuera el propietario de los archivos.

En el ámbito de la tutela pública de los archivos en el Estado Liberal nos vamos a encontrar con grupos específicos:

1º) La configuración de un verdadero sistema de archivos públicos, que va a nacer a raíz de las medidas desamortizadoras, al adquirir el Estado los fondos documentales de órdenes religiosas, que adquieren la categoría de bien nacional, muy cercana al sistema jurídico del dominio público.

2º) La existencia de archivos privados, cuya propiedad va a conservar las distintas instituciones poseedoras de los mismos, como la propia Iglesia, órdenes religiosas, instituciones culturales, etc., por lo que sus documentos van a estar regido por el régimen absoluto del derecho de la propiedad privada. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XIX se va a ir incorporando un interés general del Estado (en este caso el interés nacional) que irá generando un derecho al acceso público de los documentos con valor histórico, cuyo límite estará la libertad a la intimidad.



Desde esta perspectiva, el camino recorrido en la normativa española decimonónica para convertirse el documento de interés histórico como bien nacional sería muy arduo, y que en cierta manera es paralela a la que se va a desarrollar en otros bienes del Patrimonio Histórico-Artístico, ya que aquellos que no se insertaran como bienes de propiedad pública quedaban excluidos de su tutela.

En la configuración de una verdadera tutela del Archivo Público Español se pasaría por los siguientes periodos:

1º) Durante el Antiguo Régimen se consideraría que el archivo era un patrimonio real, no de la ciudadanía o de la nación, al igual que existían la idea de una serie de archivos privados como los pertenecientes a las órdenes religiosas o la nobleza, que escapaban de una concepción pública. En cierta forma dichos documentos respondían más un perfil de funcionalidad administrativa que de valor histórico, por lo que su acceso a los mismos era prácticamente imposible. Con la desamortización un gran número de documentos conventuales van a pasar al poder del Estado, fundamentado más en un interés administrativo a la hora de demostrar la propiedad del inmueble expropiado que de un verdadero fundamento científico.

2º) El documento insertado en los archivos va a tomar un valor histórico con la configuración del Estado-Nación ya en la etapa isabelina al convertirse en un testimonio fiel de aquellos hechos que hubieran sido esenciales en el camino de la configuración de una identidad nacional, por lo que un gran número de fondos documentales que habían pertenecidos a los antiguos conventos y monasterios españoles comenzarían a ser tratados como parte del Legado Monumental, por lo que su tutela jurídica se fue configurando a lo largo del proceso liberal. Siguiendo a Manuel Romero Tallafigo *los archivos con fondos de desaparecidas instituciones toman adjetivos oficiales como nacionales*

*o históricos (archivos nacionales, archivo histórico nacional, archivos históricos). Los archivos resaltan de un modo jamás nunca visto su condición de tesoros de la nación, como los museos y las bibliotecas, porque eran testimonios primarios e inalienables de la identidad nacional histórica*<sup>1728</sup>.

Una de las cuestiones jurídicas más importantes que se van a ir delimitando en este momento y que tendrá una trascendencia para el futuro, será la disposición al libre acceso de los documentos depositados en los archivos nacionales. Y es que la Real Orden de 20 de abril de 1844 abriría el camino para poder acceder a los archivos aquellos *estudiosos en la materia*, aunque seguía reservados todas las cuestiones que se consideraban que formaban parte de la identidad subjetiva de las personas o instituciones públicas como la Monarquía y *otros personajes eminentes*. Era el derecho a la intimidad propio de los ordenamientos liberales el que fundamentaría jurídicamente la limitación a su acceso, aunque poco a poco se fue produciendo una delimitación del interés general, que quebraría la concepción liberal de la defensa a ultranza del individualismo, para lo que el erudito pudo tener opción por el interés nacional de la propia nación de conocer los hechos del pasado, teniendo como límite la barrera cronológica. No sería hasta la promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico de 1985, en su artículo 57.1 cuando se establecería el derecho al libre acceso de los documentos públicos, en este caso los históricos, *a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y defensa del Estado o la averiguación de los delitos*.

La existencia de archivos de titularidad privada en nuestro país no ha supuesto un límite a su acceso por los investigadores en nuestro ordenamiento español contemporáneo, siempre y cuando se respetara el derecho de la intimidad personal y familiar, pero durante el periodo del Estado Liberal. El caso de los archivos eclesiásticos puede ser el caso más significativo de los archivos privados, diseñando la propia Iglesia un sistema tutelar propio en orden a la salvaguardia y conservación de sus documentos. Desde la promulgación de la Constitución Máxima Vigilantia, el 14 de junio de 1724, por el que Benedicto XIII se propuso organizar los archivos eclesiásticos a escala universal hasta la apertura del Archivo Secreto Vaticano en 1881 a la investigación pública, aunque limitada entonces a los documentos anteriores a 1815, se cubre una etapa al considerar que los documentos que encerraba solo le concernía a la propia Iglesia. A partir de este momento, el archivo, sin dejar de seguir fundamenta en los intereses eclesiásticos, se pone al servicio de la investigación pública, al servir de apoyo para la reconstrucción de la historia de algunos países. La promulgación del Código de Derecho Canónico de 1917 daría un paso más a la hora de sistematizar la tutela jurídica de los archivos,

---

<sup>1728</sup> ROMERO TALLAFIGO, Manuel *Archivista y Archivos. Soporte, edificio y organización*. 3ª edición, S&C, ediciones. Carmona, 1997, pp. 69-73.

especialmente en los cánones 372 al 378, en la que se precisaba como un investigador podía acceder a la documentación contenida en el archivo (cánon 377). Cabe mencionar asimismo algunas Circulares como la del Cardenal Merry del Val a los obispos de Italia en 1907, donde aconsejaba la regulación de los archivos eclesiásticos. La circular de Monseñor Ragonessi, Nuncio Apostólico por entonces, dirigida en nombre del Papa Pío X en 1914 a los cardenales, arzobispos y obispos de la Iglesia de España, propondría despertar en los obispos y sacerdotes el amor por los fondos documentales, apelando al sentido patriótico, por lo que recordaba el papel que la Iglesia había desempeñado en la construcción de la identidad española. Mayor trascendencia tendría la Carta Circular del Nuncio Mons. Federico Tedeschini a los cardenales y obispos españoles por mandato expreso de Pío XI, que sería considerada la Carta Magna de los archivos eclesiásticos españoles, que sería realizada a través del informe elevado a la Santa sede por el profesor alemán, Kenr, en la que criticaba el estado en que se encontraban, para lo que propone la base de organización de la tutela eclesiástica sobre el Patrimonio Documental, a lo que se uniría todo el patrimonio histórico-artístico de la diócesis, articulándose un organigrama burocrático (la creación de una Junta Diocesana), así como un tratamiento específico a los archivos, que podrían accederse públicamente a los investigadores<sup>1729</sup>.

---

<sup>1729</sup> RUBIO MERINO, Pedro *Archivística Eclesiástica*, Sevilla, 1999, pp.162-180.

---

## ***CAPÍTULO II. LAS BASES JURÍDICAS DEL RÉGIMEN TUTELAR DEL PATRIMONIO MONUMENTAL EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN COMO PRECEDENTE DEL MODELO LIBERAL: EL PATRIMONIO MONUMENTAL COMO BIEN PÚBLICO.***

---

La ilustración en España<sup>1730</sup> marca un camino trascendental en la evolución política española<sup>1731</sup>, a pesar de los fracasos estructurales que la sociedad española había heredado desde la etapa de los Austrias. Durante los reinados de Fernando VI (1746-1759) y Carlos III (1759-1788) se va a producir un ensayo modernizador en España, frustrados en muchos momentos por las críticas circunstancias sociales y económicas que se encuentra el país en la segunda mitad del siglo XVIII, por el contexto internacional, y por la estructura rígida del propio orden social que se aleja de todo intento de cambios<sup>1732</sup>. Un grupo de ministros ilustrados como Cabarrú, Floridablanca (1777-1792), intentarían poner en funcionamiento las medidas políticas y sociales que Jovellanos, entre otros pensadores ilustrados, había enunciado en su obra *Elogios de Carlos III* (1789), donde conceptualiza la idea de *una monarquía ilustrada hacia el progreso*<sup>1733</sup>, que constituiría una modalidad de la teoría y práctica del absolutismo, cuyo proyecto político se inspirará en la búsqueda de la abundancia y la prosperidad de su pueblo, pero que terminaría dilapidando en el reinado de Carlos IV (1788- )<sup>1734</sup>, que como apunta Vicent Llobart en

---

<sup>1730</sup> MARAVALL José A. “La fórmula política del Despotismo Ilustrado” en *Estudios de Historia de Pensamiento Español (siglo XVIII)*, Mondadori, Madrid, 1991.

<sup>1731</sup> FRANCO RUBIO, Gloria A. Captar súbditos y crear ciudadanos. Doble objetivo de los amigos del país en el siglo XVIII, *Historia Social*, 64, 2009, p.3. En la década de los ochentas se abre un periodo que podríamos llamar la etapa álgida del Absolutismo Ilustrado, cuando la evolución y dinámica de la sociedad española preparó el terreno a un debate intelectual y público sobre la política y las formas de gobiernos desconocidos hasta entonces. Es en esta etapa donde hay que rastrear los elementos que socavaron el viejo orden estamental que contribuye, desde los márgenes de la política absolutista a la emergencia de un nuevo orden político que va a ser fundamental a la hora de entender la crisis del Antiguo Régimen en nuestro país.

<sup>1732</sup> DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Ariel Historia, Barcelona, 1981.

<sup>1733</sup> Según Vicent Llobart *La monarquía diseñada por Jovellanos era a la vez una monarquía ilustrada, una monarquía absoluta y una monarquía condicionada: Una monarquía ilustrada, pues su objetivo principal es difundir el espíritu de la Ilustración para conseguir la prosperidad; una monarquía absoluta pues supone la soberanía plena e indiscutible del rey, la no división de poderes ni reconocimiento explícito de derechos individuales; y una monarquía condicionada en su funcionamiento pues no podía proceder de forma arbitraria contra las leyes fundamentales, ni contra la justicia y el ordenamiento vigente (...)*. LLOBART, Vicent Una monarquía ilustrada en tiempo de la Revolución: la alternativa de Jovellanos (1788-1808) en DE LORENZO ALVAREZ, Elena La época de Carlos IV (1788-1808), p.714. Como apunta este autor la expresión absolutismo ilustrado para el progreso fue utilizado por primera vez en FINZI, Roberto. Introduzione, en TURGOT, *Le ricchezze, il progresso e la storia universale*. Turín: Einaudi, 1978, p.XXX.

<sup>1734</sup> Enciso Recio, *Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808)*. Editorial Gredos, Madrid, 1991.

abril de 1808, veinte años después de la publicación del texto jovellanista, *la monarquía no había evolucionado y además se encontró con una situación repentina en la que propia monarquía, con el rey y el heredero a la cabeza, se había derrumbado de forma grotesca. Por si quedaba alguna duda, aparecía ahora patente que ni el rey –Carlos IV- ni el príncipe heredero –Fernando VII- reunía las condiciones para encabezar un proyecto de monarquía ilustrada.* Un buen ejemplo de frustración política de una Monarquía en crisis lo podemos encontrar en la actitud del propio Jovellanos, que hacia 1808 ya desencantado tras su experiencia ministerial y las persecuciones sufridas, evolucionaría hacia un nuevo modelo político en una monarquía constitucional, que no cuajaría hasta bien entrada la etapa liberal<sup>1735</sup>.

El vaivén de reformas y contrarreformas que en el plano político y socioeconómico caracteriza este periodo se proyecta al mismo tiempo en la gestación de una verdadera política de protección y conservación del Patrimonio Monumental, aunque actualmente es unánime por la historiografía jurídica que se va producir en este periodo la génesis de la tutela monumental en España. Sin ninguna duda durante este periodo se va a poner las bases de un proceso modernizador que posteriormente se irán desarrollando en la etapa liberal, y es que como afirma Andrés Ubeda de los Santos la Ilustración conllevó la revisión de España y su historia, por lo que *una de las principales características de la Ilustración es su conciencia de periodo histórico, y como consecuencia de ello, la orgullosa voluntad sentida por sus contemporáneos de modelar a su antojo la época que vivieron, de controlar todos los resortes de la naturaleza y disponer de ellos para llevar a buen puerto los principios de la razón, erigida en paradigma del nuevo estado de la humanidad*<sup>1736</sup>. No cabe duda que la Ilustración va a heredar un marco legal protector de Patrimonio Monumental que podríamos remontarlos al periodo medieval con algunas disposiciones dignas de consideración, que va a prolongar en la etapa de la Monarquía Absolutista<sup>1737</sup>, pero al mismo tiempo las medidas proteccionistas que va a

<sup>1735</sup> FERNANDEZ SARASOLA, I. El pensamiento político de Jovellanos, Estudio preliminar a JOVELLANOS, *Obras Completas, XI, Escritos políticos*. Ayuntamiento de Gijón, Instituto Feijoo, KRK, 2006, pp.XL-LVII.

<sup>1736</sup> ÚBEDA DE LOS COBOS, ANDRÉS, *El siglo, ¿dé las Luces?, en El arte del siglo de las luces*, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Caja Madrid Fundación,

<sup>1737</sup> García Fernández resume la situación en que se encontraba el Derecho del Patrimonio Monumental español hasta el siglo XVIII: *El derecho medieval contiene, elementos suficientes para hablar de una ordenación heterogénea de las materias que llamamos Patrimonio Histórico. Ordenación, claro está, fundamentalmente jurídico-pública con fines de policía de la construcción o de control de los muebles de valor simbólico, sin miras de disfrute de estos bienes (de modo que incluso el coleccionismo, que en los ámbitos cortesanos y eclesiástico tiene cierta importancia, carece de tratamiento jurídico), y sin reglar materias como el dominio y la organización administrativa. En todo caso, se trata de un precedente valioso que no debemos desdeñar. El Estado Absolutista se enfrenta a la regulación jurídica de los bienes culturales con los mismos criterios utilizados en la Edad Media, al menos hasta el siglo XVIII. Es decir, persiste la preocupación de la Iglesia y el Estado a favor del cuidado de los templos, y la normativa sobre el patrimonio real tiene una notable incidencia sobre el coleccionismo, pero no se aprecia transformación sustancial ni en los términos jurídicos empleados ni en los fines perseguidos. En la Novísima Recopilación, por ejemplo, no encontramos normas*



impulsar el ideal reformista de la Corona será el punto de partida de la legislación del Patrimonio Monumental en el ámbito español<sup>1738</sup>. El paso primordial que se va a dar en este ámbito proteccionista es la elaboración de una concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico, que aunque tutelado en todo momento por el poder regio, va a abrir el camino a un nuevo modelo de tutela patrimonial que se prolongará incluso en la etapa liberal. Y es que como subraya Antigüedad del Castillo *las teorías de la Ilustración pusieron sobre la mesa la necesidad de estructurar los conocimientos históricos-artísticos. Desde el siglo XVIII persiste la idea de que el trono debe ser el dispensador y el orientador de la cultura porque existía la idea de que determinados deben ser tutelados. Desde el ideario de la Ilustración los bienes artísticos son objetos de protección y, lo que es más importante, se siente la necesidad de protegerlos como símbolos de la riqueza y de la monarquía y de su glorioso pasado (...)*<sup>1739</sup>. De ahí que los Borbones españoles, siguiendo el modelo de los monarcas europeos occidentales, se convierten en grandes mecenas artísticos, exaltadores de las Bellas Artes, siendo probablemente el ejemplo más claro la figura de Carlos III, quien en palabras de Azara, en 1797, encerraría el carácter de un monarca ilustrado: *el rey promueve las Ciencias, protege las artes y hace la felicidad de sus reynos*.

Las concepciones de la Ilustración sobre el derecho de la propiedad irán siendo asimiladas paulatinamente en la construcción jurídica del Patrimonio Monumental como bien de interés público, verdadero antecedente del modelo liberal, que podemos sintetizar en tres hechos primordiales:

1º) Una conciencia pública del Patrimonio Monumental a instancias de la investigación científica generada por la irrupción de la historiografía artística y la conciencia histórica.

---

*anteriores al siglo XVIII sobre policía de excavaciones, protección de inmuebles y museos y restantes centros de depósitos: como mucho, alguna disposición indirectamente disuasoria del fomento de las bellas artes como la pragmática de Felipe II de 15 de mayo de 1593 de prohibición de fabricar muebles con plata batida, que fue seguida de varias pragmáticas de Felipe III con fines similares. Encontramos pues las mismas lagunas que ya vimos en el Derecho medieval: ausencia de previsiones sobre el dominio en un momento en que los principios dogmáticos de la propiedad empiezan a clasificarse (...).*

<sup>1738</sup> Cabe señalar la unanimidad de la doctrina a este respecto, así García de Enterría señala que aunque *la política de protección de nuestro patrimonio artístico surge claramente en la política de mecenazgo artístico que singulariza como uno de los rasgos más destacados a nuestra Corona (...)* sin embargo, no se concreta hasta la política ilustrada del siglo XVIII GARCIA DE ENTERRIA, 1983, p.576; En los mismos términos podemos apreciar la tesis expuesta por Concepción Barrero quien afirma tajantemente que *el siglo XVIII puede ser considerado, sin lugar a dudas, el punto de arranque de la normativa histórico-artística*, aunque señalara precedentes en el derecho clásico y en el derecho medieval español BARRERO, Concepción, 1990, p.32.

<sup>1739</sup> ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, María Dolores, “Coleccionismo, museos y mercado artístico, un debate actual” en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO (DIRECTORA), Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en España en los siglos XVIII y XIX, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp.22-23.

2º) La desvinculación estamental de los bienes de interés histórico y artístico, que aunque seguirán bajo el régimen patrimonialista de la Iglesia y la Monarquía, se convierte en uno de los hechos más significativos, al ser identificados con los intereses generales del Estado, dándole de esta manera una concepción pública. La acción del Estado Monárquico en la tutela monumental se encaminará a cambiar el régimen jurídico de propiedad, que va a reflejar la quiebra de la propia propiedad estamental. Lo público modela al propio tiempo el Patrimonio de la Corona, al diferenciar las colecciones regias como dominio privado del Monarca y el Patrimonio del Estado, que bajo patrocinio regio, va a ir identificando una conciencia nacional, por lo que parte de las colecciones privadas de los reyes españoles se abren a un conocimiento público, aunque no podamos considerarlas como propiedad pública propiamente dicha. Una propiedad especial propia del tradicionalismo español, la de la Iglesia española, va a ir sufriendo una amplia tutela por parte del Estado Monárquico, al ir perdiendo poco a poco su identidad espiritual para convertirse en parte del patrimonio de una nación. De ahí que se dispongan limitaciones a su tráfico mercantil e incluso se llegue a nacionalizar como ocurrió con la expulsión de los jesuitas, verdaderos precedentes a las medidas que los distintos gobiernos liberales va a promulgar posteriormente.

3º) Al igual que ocurriría en otros bienes patrimoniales de dominio particular, como reflejo de la superación de la vinculación tradicional de súbdito al poder monárquico, se va a ir delimitando un verdadero Derecho Privado, que dará lugar a una serie de prerrogativas de uso y disposición, que cuajarán definitivamente en el Estado Liberal. Sin duda alguna las ideas liberales que van a ir insertándose en el pensamiento ilustrado no dejará indiferente al legislador a la hora de contemplar una distinción en el tratamiento jurídico que se van a dar entre el Estado bajo tutela regia y el propietario privado de algún bien histórico-artístico. A pesar de ello, la acción del Estado Monárquico irá resquebrajando el sentido ilimitado del derecho de la propiedad privada al imponer en los estatutos de los municipios, el principio del ornato publico primará sobre los interés privados de los propietarios de los inmuebles, al disponer unos límites en el tráfico comercial de las obras de arte, y al limitar las excavaciones arqueológicas que cada vez en mayor número se iría a producir por eruditos aficionados o por el mercado fraudulento que cada vez con mayor intensidad se estaba produciendo en el ámbito español.

DERECHO DE LA PROPIEDAD EN EL SISTEMA NORMATIVO.	DERECHO DE LA PROPIEDAD EN EL SISTEMA NORMATIVO DEL PATRIMONIO MONUMENTAL
Crisis de la propiedad estamental	Tutela regia del patrimonio

y génesis del derecho de la propiedad privada	monumental.
--	-------------

La construcción jurídica del Patrimonio Monumental como bien de interés público del Estado Monárquico se fue configurando durante todo el periodo histórico, aunque podemos rastrear algunos precedentes en las etapas medievales y de los Austrias, que cuajaría a instancia del pensamiento ilustrado durante el periodo de los Borbones, concretamente en tres fases:

1º) El inicio de una gestión pública de la tutela del Patrimonio Monumental durante los reinados de Felipe V y Fernando VI.

Durante el periodo de Carlos III se produce la adopción definitiva del llamado modelo ilustrado de tutela patrimonial, al convertirse el Estado Monárquico en el verdadero garante de las antigüedades, identificada con el ideario de exaltación regia como símbolo político. Se produce una amplia regulación, que aunque dispersa y en algunos casos falta de sistematización no cabe duda que se convierte en un verdadero precedente de la regulación normativa en el ámbito español. Entre las medidas más trascendentales podemos señalar:

1º) La tutela del propio Patrimonio Monumental estatal, especialmente a raíz de las medidas desamortizadoras que van a afectar a los bienes de interés histórico y artístico de la Compañía de Jesús, al convertirlos en bienes nacionales, e incorporarlos al patrimonio de las universidades públicas.

2º) La apertura de las colecciones regias para que pudieran ser admiradas por sus súbditos siguiendo el ideal ilustrado.

3º) La gestación de una concepción pública del dominio arqueológico, al incorporar el modelo administrativo de las excavaciones que se habían producido en Herculano y Pompeya.

4º) El principio de ornato como delimitador de la intervención regia en las ciudades, como aparecen reflejadas en Los Reales decretos de 23 y 25 de noviembre de 1777, por el que la Real Academia de San Fernando alcanzaba el control de los edificios públicos, e incluso en las Ordenanzas Municipales, como la de Cádiz de 1792.

5º) Los límites del tráfico comercial de bienes de interés histórico y artístico por parte de los particulares, por lo que se promulgan la Real Orden del 5 de octubre de 1779 y la Real Orden Circular del 16 de octubre de 1779.

Sería durante el reinado de Carlos IV (1789-1808) cuando irrumpe un verdadero modelo tutelar del Patrimonio Monumental, como precedente inmediato del que se va a desarrollar posteriormente en el periodo liberal que se va a proyectar en la gestación del primer sistema normativo propiamente dicho, la Real Cédula de 1803.

Tutela Regia del Patrimonio Monumental del dominio privado	Patrimonio Arqueológico	Exportación de obras de arte	Principio de ornato
Fernando VI (1712.1759)	Catalogación de todos los monumentos antiguos de la nación de Luís José Velázquez de Velasco y Cruzado (Instrucción de 2 de noviembre de 1752).	Instrucción del marqués de la Ensenada dirigida a Francisco Barrero Peláez, Intendente de Marina del Departamento de Cartagena (R.O. del 8 de abril de 1752)	
Carlos III (1759-1788)		Real Orden Circular de 16 de octubre de 1779. Real Orden Circular del 16 de octubre de 1779	Reales decretos de 23 y 25 de noviembre de 1777 por el que la Real Academia de San Fernando alcanzaba el control de los edificios públicos. Las Ordenanzas Municipales de ornato(1792, Cádiz).
Carlos IV	Real Cédula de 1803		

### **1. La quiebra del derecho de la propiedad estamental y el advenimiento del derecho de la propiedad privada la en el ordenamiento jurídico de la monarquía ilustrada.**

Una de las novedades que va a surgir en el seno del pensamiento de la ilustración será la nueva concepción del derecho de la propiedad, al dejar en evidencia la estructura delimitadora de la llamada propiedad estamental, heredera del sistema feudal de la etapa medieval. Dos hechos trascendentales podemos plantear en la España Borbónica de la segunda mitad del siglo XVIII con respecto a la propiedad: las transformaciones que van a producirse en este momento en torno a la propiedad estamental y la delimitación de un incipiente derecho a la propiedad privada. La crisis de la propiedad estamental se pone en evidencia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, debido entre otros factores al agotamiento de un sistema productivo que no se sabe adaptar a los nuevos tiempos ideológicos y a las transformaciones sociales que se van a ir produciendo en el seno de la sociedad española. Una breve reflexión sobre este ámbito nos lleva a pensar que la rígida configuración del derecho de la propiedad, especialmente aquellos bienes que aparecen vinculados a sus dueños, sin ninguna posibilidad de ponerlos en circulación, se oponía a la idea

de un bien común propia del pensamiento ilustrado, al convertirse en un verdadero obstáculo para la generación de riqueza. Una rápida visión del momento nos lo ofrece la lectura del magnífico trabajo del profesor Bartolomé Clavero, quien abordó la distinción conceptual entre sociedad estamental y sociedad de clases, que genera la dualidad propiedad amortizada/la propiedad vinculada, en su magnífico estudio sobre la institución del Mayorazgo<sup>1740</sup>. La propiedad feudal de la tierra se convierte en el eje del régimen patrimonial en la etapa de los Borbones españoles, que va a tener como característica primordial la inalienabilidad: no era una propiedad libre en el sentido burgués del término. El noble o la institución eclesiástica no eran propietarios de los bienes sino titulares de unos derechos que les permitían usufructuar unas rentas. La gran mayoría de los bienes nobles y de manos muertas no eran mercancías que se podían comprar y vender libremente. De esta forma se aseguraba la situación del estamento, por vía legal, independientemente de la capacidad de gerencia de cada titular. Incluso en el caso de endeudamiento los bienes vinculados o amortizados no podían ser ejecutados en pago de las deudas, salvo en casos excepcionales. Se trataba de la defensa jurídica de la propiedad feudal frente al libre juego de las fuerzas económicas (...) los mayorazgos no solo podían venderse o fragmentarse entre los herederos, pues legalmente solo era posible un titular, normalmente el hermano mayor, sino que tampoco podía darse en enfiteusis o en arrendamiento a largo plazo. De esta forma el titular de un bien amortizado o vinculado evitaba la disociación, peligrosa para sus ingresos, entre propiedad útil y eminente. Pero además la propiedad feudal también se defendía contra el señor de los señores al mantener su inconfiscabilidad: el delito de lesa majestad podía ser cometido por un noble, pero no tenía porque afectar a la familia o a sus descendientes<sup>1741</sup>.

En el pensamiento económico de los ilustrados españoles se va a constatar una verdadera crítica a la situación que se estaba viviendo en estos años, que aunque pusieron en marcha algunas reformas estructurales que abriera el camino de la desvinculación de los bienes, la mayoría de los intentos fracasarían, pero al mismo tiempo abrieron el camino a una nueva concepción de la propiedad. La reforma agraria fue probablemente el campo de batalla más importante de los ilustrados cuyo objetivo primordial era multiplicar el número

---

<sup>1740</sup> CLAVERO, Bartolomé *El Mayorazgo*. Según Clavero: *El mayorazgo es una forma de propiedad vinculada, es decir, de propiedad en la cual su titular dispone de la renta, pero no de los bienes que la producen, se beneficia tan solo de todo tipo de fruto rendido por un determinado patrimonio sin poder disponer del valor constituido por el mismo; ello lleva, generalmente, a la existencia, como elemento de tal vinculación, de la sustitución sucesoria u orden de sucesión prefijado, cuya forma más inmediata siempre sería la de primogenitura, para esta propiedad de la que no puede disponer, ni siquiera para después de la muerte, su titular (...).*

<sup>1741</sup> FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano *Coyunturas y políticas económica*, TUÑÓN DE LARA, Manuel *Historia de España. Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833)* Tomo VII, Barcelona, 1980, pp.55-56. ARTOLA, M. y otros *El latifundio*, Madrid, 1978; CLAVERO, B. *El Mayorazgo, Propiedad feudal en Castilla*, Madrid, 1974;

de los cultivadores de propietarios de su tierra o que disfrutaran de duraderos arrendamientos de tierras ajenas (enfiteusis, censos); que fueran asimismo dueños de sus ganados de labor, de los aperos de labranzas y de los inmuebles necesarios, por lo que estaban formando un nuevo perfil social en el campo, el llamado labrador. El problema vendría a la hora de poner en práctica la reforma, ya que para ello debía de desprenderse a los estamentos privilegiados parte de sus propiedades, que por supuesto ni lo intentaron, por lo que proyectaron adquirir las tierras de los ayuntamientos. Un importante decreto, el del 26 de mayo de 1770, se intentaron repartir lotes de tierras entre labradores, quedando la medida en un verdadero fiasco<sup>1742</sup>. Los ilustrados españoles orientarían sus teorías a eliminar, o cuanto menos socavar, las bases socioeconómicas del Antiguo Régimen, por la que se abriendo el camino a la concepción de una intervención regia como política primordial para paliar los déficits que se estaban produciendo desde la segunda mitad del siglo XVIII. Campomanes en el *Tratado de la regalía de la amortización*, en 1765, ya escribe que *el rey en su soberanía debe establecer ley que ponga límites en las enajenaciones a las manos muertas en España*, para así ampliar el número de propietarios que pudieran disfrutar de bienes raíces desvinculados. En el mismo año, Juan Francisco de Castro planteaba dudas y posibles cambios en la propiedad con sus ataques a los mayorazgos, en su obra *Discursos críticos sobre las leyes y sus interpretes: incertidumbre y detrimentos de los mayorazgos y otras disposiciones análogas en el bien común* (...). En 1768, Pablo de Olavide va a escribir una de las obras más significativa de la reforma agraria, Informe sobre la Ley Agraria, proponiendo que se permitiese la enajenación de las tierras de la Iglesia, y los arrendamientos a largo plazo, al mismo tiempo que se prohibiese que los regulares administrasen y cultivaren directamente sus tierras para que tuvieran que darlas en censos o arrendamientos. Posteriormente, el conde de Floridablanca, en 1787, y Jovellanos, ya en 1794, pedirían a la Iglesia que frenará el incremento de la amortización eclesiástica. Se busca la configuración de una propiedad privada en manos de pequeños y medianos labradores que rompieran la inmovilidad característica de la propiedad vinculada a un estamento<sup>1743</sup>. En el Informe de Jovellanos<sup>1744</sup>, se pondría cuestión la inamovilidad del régimen jurídico de la propiedad estamental. Cabarrús iría más lejos, al atacar tajantemente la nobleza y los mayorazgos en 1795, en sus *Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública*, o el propio Menéndez Valdés, que en 1791, que arremetería contra la propiedad

<sup>1742</sup> HERR, Richard, *La Hacienda Real y los cambios rurales en la España del Antiguo Régimen*. Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991.

<sup>1743</sup> ALVAREZ ALONSO, Clara *Las dos caras de Jano. Propiedad y constitución en el primer liberalismo español* en ROBLEDO HERNANDEZ, Ricardo; DE DIOS DE DIOS, Salustiano, INFANTE MIGUEL-MOTTA, Javier *Historia de la propiedad en España: siglos XV-XX*. Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, 3-6 de junio de 1998, pp.304-314.

<sup>1744</sup> El Informe de Jovellanos está publicado en el *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 139, 1956, pp.357-462.



legitimada<sup>1745</sup>. Sería ya en la década de los ochenta cuando se abre un periodo que podríamos denominar la etapa álgida del Absolutismo Ilustrado<sup>1746</sup>, etapa como apunta Gloria A. Franco donde *hay que rastrear los elementos que socavaron el viejo orden estamental que contribuye, desde los márgenes de la política absolutista a la emergencia de un nuevo orden político que va a ser fundamental a la hora de entender la crisis del Antiguo Régimen en nuestro país; años cruciales porque en ellos se pueden localizar las primeras fisuras dentro del movimiento ilustrado español, cuando comienzan a proliferar los escritos que dirigen sus críticas contra el programa reformador del gobierno ilustrado, con el que ya no se muestran identificados muchos de sus autores y que además juzgan insuficiente para solucionar los problemas pendientes (...)* Se trata, además, de una etapa de transición en que empieza a perfilar criterios políticos, económicos y sociales que permiten germinar las semillas del liberalismo y donde aparecen oportunidades para hacer posible la materialización del cambio del status personal desde una sociedad desigualitaria, cerrada y jerárquica, dividida en estamentos como compartimentos estancos, a una sociedad sin órdenes<sup>1747</sup>.

Durante el reinado de Carlos IV se va a producir un hecho trascendental, la liberalización de la propiedad estamental, que tendría lugar a través de las diversas normas jurídicas desamortizadoras de la propiedad y redentoras de censos que tendría su punto de arranque en septiembre de 1798, que supondría la transformación de un orden jurídico de la propiedad de la tierra basada en unas estructuras inmovilistas de origen medieval en la que la amortización y los censos constituían dos elementos vertebrales. Y es que en día 17 de septiembre de 1798 serían promulgados cuatro Reales Decretos, publicadas en la Gaceta de Madrid e incluidas en la Novísima Recopilación: el que promovería la venta en pública subasta de los bienes raíces de una serie de instituciones calificadas de piadosas; el que ordenaba la venta del patrimonio que aún quedaba por enajenar de las Temporalidades de los jesuitas expulsados por Carlos III unos años antes; el que exigía el ingreso en la Real Caja de todos los caudales, rentas y venta de los bienes de los Colegios Mayores y el que autorizaba a los titulares de los mayorazgos y vínculos para que pudiesen enajenar sus bienes raíces con tal de que impusiese sus fondos en la Real Caja. En el caso de la venta de los establecimientos piadosos se incluían una serie de bienes catalogados de obras pías, que se haría forzosa en el caso de los bienes raíces de Hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de

---

<sup>1745</sup> PESSET, Mariano “Fundamento ideológico de la propiedad”, en ROBLEDÓ HERNÁNDEZ, Ricardo; DE DIOS DE DIOS, Salustiano, INFANTE MIGUEL-MOTTA, Javier *Historia de la propiedad en España: siglos XV-XX*. Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, 3-6 de junio de 1998, *Historia del derecho de la propiedad en España*, pp.445-448.

<sup>1746</sup> FRANCO RUBIO, Gloria A. En los márgenes del Absolutismo Ilustrado: la emergencia de un nuevo orden político a finales del siglo XVIII, Ponencia presentada al Seminario Internacional *Monarquía, Corte y Poder en la España del siglo XVIII*, Almería, 11-13 de junio de 2007.

<sup>1747</sup> FRANCO RUBIO, Gloria A. Captar súbditos y crear ciudadanos, doble objetivo de los Amigos del País en el siglo XVIII en *Historia Social*, n.º. 64, 2009, p.6.

expósitos, cofradías, obras pías y patronatos de legos<sup>1748</sup>. Las disposiciones significarían el inicio de la disolución del Antiguo Régimen en el ámbito de la propiedad estamental, que como apunta Carmen Iglesias simbolizaría el fin de una época (el fin de las llamadas monarquías absolutistas) y el advenimiento de otra (la contemporaneidad), sustentada en los pilares de una nueva y modernizadora filosofía vital basada en el liberalismo<sup>1749</sup>.

La difusión de la obra de Adam Smith va a introducir una mirada renovada del concepto de la propiedad, especialmente el reconocimiento del interés propio, que va a ir anticipando la idea de un derecho de la propiedad privada de los particulares, especialmente en el ámbito del comercio<sup>1750</sup>. Uno de los teóricos economistas que ejemplifica la evolución hacia ideas propias de un liberalismo inicial lo podríamos encontrar en la figura de Antonio Raymundo Ibáñez, marqués de Sargadelos, quien en boca de González de la Serna habría evolucionado desde la fisiocracia al liberalismo, ejercitándose como difusor y defensor de las doctrinas de Adam Smith. En 1802 publica una obra titulada *Discurso económico-político*, defendiendo el derecho de la propiedad privada con unos matices renovadores en el ámbito español: *El derecho de la propiedad, que es una consecuencia del derecho natural, aunque limitado por las leyes de la sociedad, se mira con sagrado en todos los gobiernos. No por ello pretendo establecer una libertad absoluta (...) El comerciante, dirigiendo sus afanes por enriquecerse, concurre a la felicidad general; sus especulaciones, protegidas por la libertad natural sin trabas ni prohibiciones odiosas acrecientan la estimación territorial, la abundancia de subsistencias, el aumento de la población, fabricas, navegación, derechos reales (...) Solo el libre comercio es capaz de medir y nivelar la justa proporción por la concurrencia que facilita*<sup>1751</sup>. En la misma línea encontramos la defensa que haría el ilustrado Sempere sobre el derecho de la propiedad privada en su obra *Policía de España acerca de pobres, vagos y malentretenidos*, publicada en 1801, donde plantea como *La propiedad ha sido el origen y fundamento principal de la reunión del género humano; de todas las sociedades bien constituidas; de los progresos, del entendimiento; de la civilización y de las buenas costumbres*<sup>1752</sup>. Las teorías económicas del derecho de la propiedad privada en el pensamiento ilustrado español se plasmarían en la propia política económica que irían cuajando con una delimitación de la empresa privada como alternativa a las manufacturas reales que habían

<sup>1748</sup> LECOUNA PRATS, Emilio Lecuona La liberalización de la propiedad a finales del antiguo régimen. Centro y periferia del proceso desamortizador y redentor de censos perpetuos en tiempos de Carlos IV. Universidad de Málaga, Estudios y Ensayos, 93, pp.59-61.

<sup>1749</sup> IGLESIAS, Carmen “El fin de siglo: la entrada en la contemporaneidad”, VV.AA. *Visiones de fin de siglo*, Taurus, Colección Pensamiento, Madrid, 1999, pp.95-96.

<sup>1750</sup> ELORZA, Antonio *La ideología liberal en la Ilustración española*, Tecnos, Madrid, 1970.

<sup>1751</sup> OCAMPO SUAREZ-VALDÉS, Joaquín Antonio “Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos: empresa e ilustración en el ocaso del Antiguo Régimen (1784-1809)” en LORENZO ALVAREZ, Elena (ed.) *La época de Carlos IV*, Oviedo, 2009, p.847.

<sup>1752</sup> RICO JIMÉNEZ, Juan *De la Ilustración al Liberalismo (el pensamiento de Sempere y Guarino)*. Alicante, Universidad de Alicante, 1997, p.101.

quedado arruinadas en la segunda mitad del siglo XVIII<sup>1753</sup>. Por consiguiente, el camino de lo privado en el ámbito jurídico y económico se estaba abriendo paso como nueva actitud social y que la Revolución Francesa se encargaría de ponerlo definitivamente en práctica. En el ámbito de la doctrina jurídica el derecho de la propiedad privada va abriendo camino, como queda reflejada en la obra de los doctores De Asso y De Manuel titulada *Instituciones del Derecho Civil de Castilla*, aparecida en las últimas décadas del siglo XVIII, que en el análisis del dominio, dan una definición del derecho de la propiedad consistente en “*un poderío, que nace del derecho, que cualquiera tiene en la cosa, por razón de la qual puede disponer, y percibir toda utilidad de ella como quiera, y excluir a los otros de uso, y vindicarla de quien la posea, a no ser pleito o ley se oponga*”<sup>1754</sup>. En la definición ya aparece el carácter absoluto del derecho de la propiedad, que carecía de las limitaciones que aparecían en el Código de las Partidas. De Asso y De Manuel introducen los principales elementos que contiene la redacción moderna del derecho de la propiedad: facultad de disposición, goce, vindicación y exclusión. En la facultad de exclusión de las fincas rústicas se observa ya una delimitación del derecho de la propiedad privada, que incluso aparecía fundamentada en la Real Cédula de 13 de abril de 1779, en la que introducía la posibilidad de que el propietario podía manifestar externamente la facultad de exclusión mediante el cercamiento de las fincas<sup>1755</sup>. De Tapia ofrece una definición novedosa donde ya se diferencia los dos elementos que van a delimitarlo durante las décadas siguientes: la disposición y el goce, añadiendo unos límites al derecho. Así se definiría a la propiedad como el derecho que el hombre tiene de disponer de una cosa (facultad de disposición) y percibir las utilidades que produzca (facultad de goce), si no lo impide la ley, la voluntad del testador, o algún convenio. Martínez Marina defendería el carácter absoluto del derecho de la propiedad al definirla como un sagrado que debía respetar el mismo soberano, ya que las leyes proporcionaban a los miembros de la sociedad no tan solamente la seguridad de haberes y heredades, sino también el uso libre y absoluto para hablar de ellas y en ellas lo que quisiesen como verdaderos dueños<sup>1756</sup>. Martí de Eixala eran propios del dueño la facultad de cambiar la forma de la cosa, de deteriorarla, de mejorarla, de destruirla, de consumirla, de transmitirla o de

---

<sup>1753</sup> Recogemos el análisis de Joaquín Ocampo Suárez-Valdés sobre la aparición del sector privado en la economía: *Asumido el fracaso industrializador público, las políticas industriales buscarán su relevo en el sector privado (...) En este sentido, la época de Carlos III asistirá a un despliegue sin precedente de medidas de regulación y fomento favorables a la iniciativa privada (...)*, OCAMPO SUÁREZ-VALDÉS, 2009, p.835.

<sup>1754</sup> JORDAN DE ASSO, Ignacio y DE MANUEL, Miguel *Instituciones del Derecho Civil de Castilla*, enmendadas, ilustradas y añadidas conforme a la Real Orden de 5 de octubre de 1802 (...) Tomo 1, 7ª edición, Imprenta de Don Tomás Albán, Madrid, 1806, p.151.

<sup>1755</sup> COSIALLS UBACH, Andrés Miguel régimen jurídico de la propiedad agraria sujeta a la nueva PAC, 2009,

<sup>1756</sup> MARTÍNEZ MARINA, Francisco *Ensayo histórico-crítico sobre Legislación y principales Cuerpos legales de los Reinos de León y Castilla, especialmente sobre el Código de la Siete Partidas de Don Alonso el Sabio*, Tomo 1. Imprenta de D.E. Agudo, Madrid, 1834, p.230.

adquirir los frutos de las mismas<sup>1757</sup>. Vicente Santamaría de Paredes sostendría la diferenciación entre la facultad de exclusión del de disposición, al afirmar que en el ejercicio de la propiedad llevaban consigo dos derechos: el de excluir a los demás en el disfrute de una cosa objeto de ella, y el de reportar todas las utilidades que se pueden obtener de la misma<sup>1758</sup>.

## **2. La quiebra de la concepción del patrimonio monumental estamental y su configuración como bien de interés público en la construcción de la monarquía ilustrada.**

### **2.1. Una peculiar concepción pública del Patrimonio Monumental Regio en la España de los Borbones.**

La construcción de la Monarquía Ilustrada en la etapa de los Borbones conllevará una nueva concepción política, por lo que el Rey comienza a ser identificado con la idea de Nación, donde se vieran representados sus súbditos. Las colecciones de obras de arte regias se convertirán en un instrumento legitimador de la exaltación del Monarca, que al ser identificado con la Nación, abre el camino de una verdadera conciencia pública del Patrimonio Monumental en el ámbito hispano. La apertura de las galerías reales a la contemplación de sus súbditos entrará a formar parte de la política de exaltación de los valores nacionales que ayude a la construcción del nuevo Estado Monárquico. De esta manera una parte de los bienes de las colecciones regias se convertirán en parte de la identidad nacional, por lo que se irán vinculando a la Corona, excluyéndola del dominio privado del Soberano, como se irán proyectando en los propios testamentos reales.

#### **2.1.1. Las antigüedades como referente de exaltación de la Monarquía ilustrada.**

La instrumentalización política del arte como vehículo de exaltación monárquica tiene sus raíces en la Antigüedad grecolatina, y fue perfectamente asimilada en el ámbito hispano tanto por los Austrias como por los Borbones. Será en el discurso axiológico del coleccionismo real como exaltación de la institución monárquica donde vamos a encontrar el verdadero fundamento jurídico de la tutela de estos bienes, al identificar estos bienes con el símbolo de la propia Nación, en un momento en que nos encontramos con una novedad política evidente: se intentará una nueva relación entre el Monarca y los súbditos, una entidad que los identifiquen mutuamente, por lo que va a ir cuajando durante todo el siglo XVIII la idea de la construcción política de lo nacional identificada con la Monarquía, por lo que como puntualiza Alberto Medina Domínguez el monarca y la nación *comenzar a funcionar como iconos*

<sup>1757</sup> MARTI Y DE EIXALA, Ramón *Tratado elemental del Derecho civil Romano y Español*, Imprenta de Joaquín Verdaguer, Barcelona, 1838, p.105.

<sup>1758</sup> SANTAMARÍA DE PAREDES, Vicente *La defensa del derecho de Propiedad y sus relaciones con el trabajo*, Tipografía del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1874, p.68.

*mutuos de unidad. Uno representa necesariamente al otro.* Desde esta perspectiva, la tarea primordial de la nueva dinastía borbónica, será la elaboración de un nuevo modelo de nación, donde al exaltarse la Monarquía se va a exaltar al mismo tiempo a la propia Nación, por lo que confluyen ambos entes en una misma identidad, por lo que lo nacional se confunde con lo real y viscierversa<sup>1759</sup>, hecho que aunque se había ido construyendo desde el siglo XVI con la aparición del Estado Moderno, no cristalizaría definitivamente hasta el siglo XVIII<sup>1760</sup>. Álvarez Junco en su magnífico ensayo *Mater Dolorosa* ya puntualiza como *al igual que ocurrió en Francia o Inglaterra, los dos ejemplos más clásicos de nacionalismo estatal en Europa, el proceso de formación de una identidad “española” gira alrededor de la monarquía*<sup>1761</sup>. La concepción de la existencia de la identidad de España soportada en la construcción de la Monarquía Borbónica da lugar a un proceso de nacionalización, que como apunta Gonzalo Anes<sup>1762</sup>, la idea de España adquirió especial vigor durante el siglo XVIII, y subrayado por Julián Marías, al precisar la existencia ya de una verdadera nación, incluso teniendo conciencia del mismo los propios españoles<sup>1763</sup>. En un texto del ilustrado Sempere de su conocido *Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III*, aparece esbozada la idea de nación que concebían algunos ilustrados: *mientras que una nación no llegase a consolidar en su seno el espíritu de unidad y de patriotismo le faltarían muchos pasos para dar en la civilización, por lo que habría que superar la separación entre las*

---

<sup>1759</sup> La idea de una nueva relación entre el Monarca y sus súbditos se puede perfilar en el ámbito político y administrativo, especialmente en la configuración de la centralización como eje de la nueva política dinástica en aras a una relación más directa con sus súbditos, que los separaría de la heterogeneidad administrativa de la etapa de los Austrias: *La relación entre monarquía y pueblo concebida por los Habsburgo será totalmente reconfigurada. Antes de la llegada de los Borbones, las reglas del juego político estaban fundadas en un (...) sistema de privilegios regionales y una administración local organizada en torno a la institución de la villa que había provocado una extremada proliferación de jurisdicciones, una diseminación del poder en múltiples entidades menores vinculadas al centro con débiles conexiones (...). Este esquema será sometido a una transformación radical por parte de los Borbones. Buena parte de los cambios administrativos que se introducirán tendrán como objetivo la centralización a través del recorte de las atribuciones de poderes locales y regionales (...) La nación como unidad administrativa acaba con la competencia de centros locales y regionales de poder que pueden funcionar como contrapunto. El nuevo español empieza a sentirse más cerca de su monarca a través de un nuevo tipo de burocracia (...).* MEDINA DOMINGUEZ, Alberto, *Espejo de sombras. Sujeto y multitud en la España del siglo XVIII*, Marcel Pons Historia, Madrid, 2009, pp. 35-37.

<sup>1760</sup> El profesor Wulf al analizar la Crónica General de España de Ocampo, publicada en Medina del Campo en 1553, ya perfila la génesis del carácter nacional de la Monarquía española, donde destaca entre los valores aportados por Ocampo la idea de una unidad peninsular frente a la amenaza de las invasiones extranjeras, la concepción de que la cultura española es la más antigua de las culturas europeas, llegando a una conclusión final de exaltación monárquica al considerarse a la Corona como fórmula inherente a lo mejor de la esencia hispana..

<sup>1761</sup> ALVAREZ JUNCO, José *Mater Dolorosa*, p.63. 10ª edición, septiembre de 1997, p.63

<sup>1762</sup> ANES, Gonzalo *La idea de España en el siglo de las Luces, España, reflexiones sobre el ser de España*, Real Academia de la Historia, Madrid, 1998, pp.223.224.

<sup>1763</sup> FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. “Dinastía y comunidad política. El momento de la patria; la nación de los modernos. Incertidumbres de la nación en la España de Felipe V”, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., *Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna*, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp.197-224 y pp.177-196.



provincias, con el fin de que ningún hombre de mérito de nuestra nación se pudiera decir más que es español. Y es que como señala Roberto Fernández el Setecientos contribuyó decisivamente a la configuración de España como un Estado-Nación y el reformismo borbónico no fue ajeno a ello, pero su contribución no se hizo queriendo anular el sentimiento que los españoles sentían hacia sus patrias natalicias, sino tratando de potenciar el sentimiento de españolidad, que se vivía (...) no como antagónico al regional<sup>1764</sup>. De ahí el camino de la uniformidad jurídica y administrativa que se comenzaría a fraguar en el seno político de los Borbones españoles, fortaleciendo de este modo la idea de la existencia de una nación que aglutinara a todos los súbditos del reino, convirtiendo a la Monarquía en el verdadero factor aglutinante<sup>1765</sup>. La creación de un derecho patrio desarrollado por la institución monárquica reforzaba la idea de un derecho supuestamente nacional, autónomo y global, producto del territorio que conformaba el reino, cuya expresión corría a cargo del soberano, pues nadie aceptaba en el siglo XVIII español la idea de una soberanía nacional<sup>1766</sup>.

En el camino de la configuración de una nueva Monarquía Nacional se irá gestando el problema de su legitimidad, y lo buscará primordialmente en las propias raíces históricas, en el plano cultural. Se parte en principio de la base de la identificación histórica de la Monarquía hispana con su pueblo desde sus propios orígenes como aparece reflejado en los textos del Marqués de Valdeflores, *Los Anales de la Nación Española*, una de las obras más significativas de la historiografía española del siglo XVIII donde como señala Martí-Aguilar, a lo largo de toda la obra una especial atención a la génesis de la tradición monárquica en España y, dentro de lo posible, delineando genealogías gloriosas y exaltantes de las dinastías hispanas. Es en el tratamiento de Tartessos donde estas proyecciones sobre la monarquía alcanzan su máxima expresión, en una clara asociación del modelo monárquico con la esencia de lo español y de una España independiente, rica, próspera y que incluso se proyecta al exterior, pasando de colonizada a colonizadora<sup>1767</sup>. Sin embargo, se buscará un nuevo lenguaje que identifique a la nueva dinastía como legítima frente a las huellas históricas de los Austrias. Desde el advenimiento de los Borbones con la llegada de Felipe V al trono, y especialmente con la llegada al trono de Carlos III, se va a ir configurando una nueva Monarquía Nacional, que al mismo tiempo que querer enterrar algunas prácticas políticas e ideológicas

<sup>1764</sup> FERNÁNDEZ, Roberto, *la herencia histórica del Absolutismo Borbónico*, en PÉREZ SARRION, Guillermo, *Más Estado y más Mercado, Absolutismo y Economía en la España del siglo XVIII*, Editorial Silex, Madrid, 2011, p.37.

<sup>1765</sup> La concepción de patriota tomó su acepción en la centuria ilustrada, en MARAVALL, José Antonio, *El sentimiento de la nación en el siglo XVIII: la obra de Forner, Estudios de la historia del pensamiento español*, Madrid, 1991, pp.47-48.

<sup>1766</sup> DEDIEU, Jean-Pierre, "El aparato del gobierno de la Monarquía española en el siglo XVIII", en PEREZ SARRION, Guillermo (ed.) *Más Estado y más Mercado, Absolutismo y Economía en la España del siglo XVIII*, Editorial Silex, Madrid, 2011, pp.62-63.

<sup>1767</sup> ALVAREZ MARRÍ-AGUILAR, Manuel *La antigüedad en la Historiografía española del siglo XVIII: El marqués de Valdeflores* Textos mínimos, Universidad de Málaga, 1966, p.165.



de la etapa de los Austrias, buscará una legitimación de continuidad histórica con su pueblo, naciendo en palabras de Alberto Medina *una verdadera conciencia patriótica, donde el nuevo español empiece a sentirse más cerca de su monarca(...), por lo que la relación con el Rey no estará ya fundada en la relativa libertad del súbdito(...)* para el pueblo, ser ahora patriota significará más literalmente, obedecer; para el Rey, mandar(...) Monarca y Nación comenzarán a funcionar como iconos mutuos de la unidad. Uno representa necesariamente el otro<sup>1768</sup>.

Será el mundo clásico el fundamento ideológico de la nueva Monarquía, donde buscará su verdadera identidad: *Una civilización enterrada se había convertido en el vehículo perfecto para la promoción de una identidad nacional. En el caso de España, el mundo clásico será utilizado de forma distinta, convirtiéndose no ya en el medio de construir una identidad independiente, sino más bien una renovada, ilustrada, y desligada del lastre que suponía la historia más reciente representada por los Austrias. España se iba a convertir en un país moderno habitando los principios universales representados por los valores clásicos y rompiendo con su histórico aislamiento cultural*<sup>1769</sup>. Desde este momento, la Monarquía identificada con la Nación se hará cargo del legado patrimonial, donde buscará la génesis de su verdadera legitimidad, e incluso cumpliendo la misión primordial de dar cobertura ideológica a la persona del Rey y a la simbología que representaba. Tanto las nuevas construcciones palaciegas auspiciadas por los borbones, como los restos de las antigüedades clásicas se van a convertir en objeto de su política cultural, más aun cuando se convierte en instrumento vital no solamente de una ideológica estética concreta, el clasicismo, sino como exaltación de una nueva Monarquía que busca la felicidad y la prosperidad de sus súbditos, por lo que se identifica con la concepción del propio Estado. De esta manera todos aquellos bienes históricos-artísticos que simbolicen la nueva Monarquía serán dignos de protección regia, que facilitaría sin duda alguna la existencia de una normativa proteccionista sobre aquellos objetos que consideraba digno de conservar por su validez ideológica<sup>1770</sup>. Recientemente Jorge Maier ha analizado el papel ideológico que

---

<sup>1768</sup> MEDINA DOMINGUEZ, Alberto, *Espejo de sombras. Sujeto y multitud del siglo XVIII*. Marcial Pons. Historia. Madrid, 2009, pp.35-37.

<sup>1769</sup> MEDINA DOMINGUEZ, Alberto, 2009, pp.42-43.

<sup>1770</sup> La protección del Patrimonio Histórico-Artístico por la Monarquía como instrumento de propaganda y justificación de su propio poder político lo podemos ya encontrar en el propio reinado de Alfonso X, el sabio (1254-1282). Francisco Márquez Villanueva identifica con el concepto político de la cultura, ya que como se aprecia en las Partidas no quería reinar sobre un pueblo ignorante, ya que lo consideraba como un pueblo incapaz de asumir sus responsabilidades, por lo que una de los pilares de su política fue sin ninguna duda dotar a su pueblo de identidad cultural. En el Fuero Real de Alfonso X se contemplan algunas normas roteccionistas del patrimonio eclesiástico, entre los que destacaban el hecho de que obispos y abades se preocupasen por la conservación de los bienes (la ley II), al mismo tiempo que se prohibía vender o enajenar cualquier bien de sus iglesias (Ley III). En la Partida III se contemplaban ya algunas normas que algunos autores, como el caso de García Fernández o Concepción Barrero consideraban plenamente conservacionistas, verdadero preámbulo de lo

desempeñaría las antigüedades que ornamentaron el Palacio Real: *El Palacio Real en el siglo XVIII, además de la Residencia de los Reyes, fue el centro desde donde se ejerció el gobierno y se proyectó la imagen del Monarca y de la Monarquía, en definitiva de la Corona (...)* Desde Palacio se utilizó, bien con la presencia de piezas de arte antiguo, bien a través de programas decorativos, la antigüedad greco-romana para transmitir distintos valores en conexión con la imagen de la Corona. En este sentido desde Palacio irradió la promoción e interés hacia la Antigüedad, y por ello de la Arqueología (...) <sup>1771</sup>. Sin ninguna duda la pintura se convierte en la corte de los Borbones en el arte plástico más importante, que se refleja no solamente en el ámbito del coleccionismo regio y privado, sino en la mentalidad de los propios ilustrados españoles. Ya en la etapa de los Austrias, especialmente con Felipe III y Felipe IV, la pintura ha alcanzado un prestigio considerable en la erudición española, elogiada en los famosos tratados del Arte de la pintura de Francisco Pacheco, o en la vida de los artistas de Palomino. Gregorio Mayans publicaría su famoso Arte de pintar, ensayo donde elogiaría los valores que aparecen insertados como forma de expresión de creatividad humana. Aunque nunca fue elogiado por la crítica, e incluso su publicación se retardó hasta 1854, no por ello deja de ser uno de los ejemplos más significativos de exaltación de la pintura en el ámbito de la España borbónica. La exaltación de la pintura no se fundamenta solamente en sus valores estéticos, sino también en los valores ideológicos, muy identificativa con la simbología de exaltación monárquica va a cumplir en este momento el conjunto de las artes: *La pintura ordena a las genealogías, distinguiendo y representando los progenitores, como con gran política i razón lo egecutaban los romanos (...)* También representa la pintura los blasones de las familias, de que tanto se glorian los hombres ilustres i los que desean serlos o parecerlos <sup>1772</sup>. La escultura, al igual que la pintura, vivirá una etapa de apogeo, especialmente con el coleccionismo de la retratística romana.

### **2.1.2. La peculiar naturaleza jurídica del Patrimonio Monumental Regio en la Monarquía Ilustrada.**

El carácter público de la Corona en la etapa de los Borbones va a afectar al régimen patrimonialista de los bienes que componía el Patrimonio Regio, entre los que se encontraban los de interés histórico y artístico, una amplia colección de piezas que se encontraba entre las más importante y numerosa de Europa, y que había heredado de la Casa de los Austrias, e incluso habían incrementando los propios Borbones. El conjunto de antigüedades que formaban parte del coleccionismo regio se debe de abordar en su análisis jurídico más allá de una pura recreación estética de los propios monarcas, sino

---

que actualmente tutelan los valores patrimoniales, .MARQUEZ VILLANUEVA, Francisco *El concepto cultural alfonsí* Madrid, 1994. pp. 30-31

<sup>1771</sup> MAIER ALLENDE, Jorge “Las Antigüedades en Palacio: Ideología y función de las colecciones reales de arte antiguo en el siglo XVIII” *Sitios Reales, Revista del Patrimonio Nacional*, Año XLVII, Núm.183, Primer Trimestre de 2010, p.6.

<sup>1772</sup> MAYANS Y SICAR, Gregorio, Arte de pintar, en *Obras Completas*, V, Ensayos y Varia, Ayuntamiento de Oliva, 1986, p.252.

que como había ocurrido en el caso de las otras casas reales europeas, las antigüedades se convirtieron en una verdadera programación ideológica, en la que la imagen clásica se ponía al servicio del poder monárquico<sup>1773</sup>, de ahí que se generase una cuestión jurídica que tardaría en resolverse, que sería la pertenencia de estos bienes, al considerarse algunos vinculados a la Corona, por lo que eran bienes institucionales que comenzaban a desempeñar una función pública de representatividad, y aquellos que seguían insertados en el dominio privado del propio Monarca, que podían ser considerados como bienes libres, por lo que se comportaba como un propietario particular. En realidad, podemos encontrar en este caso una analogía con el régimen jurídico de las familias aristocráticas, o con las propias órdenes religiosas<sup>1774</sup>.

#### **2.1.2.1. La apertura pública de las galerías reales y las bibliotecas reales.**

Se ha repetido hasta la saciedad el gusto personal que tuvieron los Borbones por la adquisición de esculturas clásicas y pinturas que los convirtieron en los coleccionistas más relevantes de la Europa del siglo XVIII. El coleccionismo regio de bienes histórico y artístico es un hecho desde las Monarquías Medievales hasta los Borbones, como aparece analizado por el profesor Gaya Nuño, del que recogemos a modo de resumen: *Los monarcas españoles medievales fueron grandísimos favorecedores de las artes, pero no pensaron en formarse una colección (...) Para ellos, la pintura era un vehículo de devoción y de liturgia, por lo que se contentaban con hacer donativo, a las iglesias y a los monasterios de su predilección, de tablas y retablos. La primera persona con corona y cetro que se preocupó de formar una colección de arte en el sentido más estricto de la palabra sería Isabel, la Católica, a cuya muerte se inventariarían algo así como unas trescientas tablas y retablos (...) por desgracia, esa colección de Isabel se desbarató (...) era costumbre vieja de subastar los bienes de la casa de todo rey difunto, y la sucesión de la Reina no modificó tan desdichada tradición. Tan sólo la parte de su herencia entregada a la Capilla Real de Granada se salva de la dispersión. Carlos I sería uno de los coleccionistas más importante de su tiempo, que ayudado por el pintor Tiziano seleccionaría las obras que iría adquiriendo para su propia colección personal (...) La hermana de éste, doña María de Hungría, también era coleccionista, y llenó de cuadros sus palacios (...), obras que pasarían a España después de fallecer la dicha princesa en 1558 (...) acabado el siglo XVI, las colecciones reales contarían con 358 cuadros en el Alcázar de Madrid, 117, en el*

---

<sup>1773</sup> TARRAGA BALDO, M<sup>a</sup> Luisa *La imagen clásica al servicio del poder*, Actas del X Congreso del CEHA, 1994, pp.343-348.

<sup>1774</sup> Podríamos citar infinidad de casos en la que el Monarca adquiere colecciones de pinturas y esculturas a título personal. Felipe V, influenciado por su segunda esposa, Isabel de Farnesio, transmitiría al embajador español ante la Santa Sede, el Cardenal Acquaviva, en septiembre de 1724, el encargo de comprar estatuas y columnas antiguas, deseo que sería satisfecho cuando el citado cardenal adquirió del Príncipe Livio Odescalchi, sobrino del Papa Alejandro VIII, para los soberanos españoles, y con destino a la ornamentación del piso bajo del Palacio de San Idelfonso, la colección de esculturas clásicas reunida para la Reina Cristina de Suecia. TARRAGA BALDO, M<sup>a</sup> Luisa *La imagen clásica al servicio del poder en el siglo XVIII en "La imagen clásica al servicio del poder"*, Actas del X Congreso del CEHA, 1994; DE SALAS, Xavier, "Compra para España de la Colección de antigüedades de Cristina de Suecia", *Archivo Español de Arte*, Vol. XIV, 1940-1941, p.242.

*Palacio del Pardo; y en el Escorial, 250, por lo que sumaban 725 pinturas, aunque algunas se perderían en el incendio del Pardo de 1604. Felipe IV heredaría estas colecciones, y al ser un amante de las letras y las artes, incrementaría las colecciones regias, con una política de adquisición en el extranjero, como ocurrió con la compra en Amberes a la muerte de Rubens de lo mejor de su colección, treinta y dos cuadros en total, u la celebrada en Londres, en la subasta de las obras artísticas que habían pertenecido a Carlos I de Inglaterra, con la revolución de los puritanos ingleses, a lo que habría de unirse la aportación del propio Velázquez con sus viajes a Italia para adquirir obras para el monarca. A ello se unirían las propias obras personales de los pintores de cámara que acrecentaron aun más el censo de obras perteneciente a la Monarquía. Ya a la muerte de Carlos II en 1700, la suma de inventario arrojaría la cifra de 5.539 cuadros, distribuidos entre el Alcázar madrileño y los Reales Sitios, estando ubicados 1622 en el Escorial. La llegada de los Borbones supone un incremento de los bienes artísticos de coleccionismo real, especialmente con Felipe V, que compraría en un primer lote en 1724, las obras que habían pertenecidos al pintor italiano Carlos Maratta, y casi simultáneamente la adquisición de la colección de esculturas romanas de Cristina de Suecia, con la finalidad de establecer una colección autónoma en el Real Sitio de la Granja de San Idelfonso. A ello se unirían las adquisiciones que realizaría su esposa Isabel de Farnesio, que incrementaría la colección. Desgraciadamente un hecho trascendental iba a mitigar el número de obras: el incendio que se produjo en la noche de Navidad de 1734 en el Alcázar de Madrid, que produjo cuantiosas pérdidas, aunque algunas pudieron sobrevivir. Por su parte, Fernando VI sería muy poco cultivador de la pintura, por lo que ni él ni su esposa, Doña Bárbara de Braganza, adquirieron un gran número de obras, contrariamente a Carlos III, quien revivió el espíritu coleccionista, adquiriendo la colección del Marqués de la Ensenada, y otras casas nobiliarias, por lo que podemos afirmar que a su muerte la colección regia contaba con 4.717 cuadros, distribuidos entre el Palacio Nuevo y los Sitios Reales. Carlos IV seguiría ensanchando la colección, especialmente con las pinturas de Goya<sup>1775</sup>. Estas obras de artes pasaban a formar parte del dominio privado del Rey, ubicándose en las distintas galerías de esculturas y pinturas que se fueron incorporando en los palacios reales desde el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio, siendo un ejemplo significativo las galerías de esculturas que se instalaron en los jardines del Buen Retiro y el Alcázar, verdadero studiolo de contemplación estética y exaltación monárquica al mismo tiempo, cuyo acceso del público era muy limitado<sup>1776</sup>.*

Sin embargo, con el advenimiento de Carlos III se va ir definiéndose una política de apertura pública del coleccionismo regio, aunque en la España Borbónica no podemos hablar de la existencia de un verdadero museo público dirigido a un público ilustrado donde se expusiese las obras más significativas

<sup>1775</sup> GAYA NUÑO, Juan Antonio, 1969, pp.13-40; RODRIGUEZ ALCALDE, Leopoldo *El coleccionismo de pintura en España*, Fundación Marcelino Botín, Conferencia pronunciada en la Fundación Marcelino Botín el día 25 de agosto de 1989; PEDRO DE MADRAZO, viaje artístico de tres siglos por las colecciones de cuadros de los Reyes de España ...

<sup>1776</sup> LUZON NOGUÉ, J.M. "Isabel de Farnesio y la Galería de Esculturas de San Idelfonso", en RODRIGUEZ RUIZ, D. *El Real Sitio de San Idelfonso. Retrato y escena del Rey*, Madrid, 2000, pp.206-212.

de los gabinetes reales de carácter privado. Sería el pintor Mengs quien proyectaría la exhibición pública de algunas colecciones de obras de arte del patrimonio particular del Rey, después de haberse convertido en el verdadero asesor del monarca en la adquisición de sus colecciones de obras artísticas, especialmente treinta cuadros que habían sido de propiedad del Marqués de Ensenada, poco tiempos después de subir al trono Carlos III, en 1768 y del comerciante Juan Kelly. Sin embargo, como el propio Mengs referiría en sus propias Obras, el proyecto de la apertura pública de la galería real no cuajó, quedando frustrado la intencionalidad del pintor, como relataría el mismo en una famosa carta dirigida a Ponz<sup>1777</sup>, aunque sí promovió el Gabinete de Ciencias Naturales, fundado por Fernando VI en 1752, que respondía prácticamente a las pretensiones de un museo de carácter público a la usanza ilustrada. Por el contrario, las joyas pertenecientes a la Casa Real serían depositadas por Carlos III en el Museo de Ciencias Naturales el 2 de septiembre de 1776. En el ámbito nobiliario también se proyectó la existencia de algunas galerías de carácter público, aunque que no se llegó a realizar, como fue el caso del Duque de Alba que hacia 1826 le encargó algunos artistas pensionados en Roma bajo su protección económica la instalación de una galería pública en su Palacio de Liria, donde expondría los cientos de cuadros, vasos griegos, ídolos, estampas, sepulcros antiguos, estatuillas de bronce, monedas y medallas.

El 1 de marzo de 1712 se abriría la primera biblioteca pública española, a instancia de Felipe V con el objeto de ilustrar a sus súbditos. El proyecto de creación fue presentado por su confesor el francés Pierre Robinet, en colaboración con su amigo el regalista Melchor Rafael de Macanaz, secretario de Felipe V, aprovechando los fondos de confiscados a los austracistas vencidos en la Guerra de Sucesión. Una vez presentado el Plan, el monarca manifestó a José de Grimaldo, secretario de Estado y del Despacho Universal de la Guerra y Real Hacienda, como responsable de los asuntos culturales, que fuera colocado una suntuosa librería en el sitio que comprende el pasadizo que va de Palacio al Convento de la Encarnación<sup>1778</sup>. La primera asignación de rentas se lo confirió un Real Cédula de 14 de diciembre de 1715, sobre el recargo de dos maravedíes en cada libra de tabaco en polvo, hojas y cigarros de todos géneros que se consumieren en los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia. En el primer reglamento de la Biblioteca Real, aprobado por Real

---

<sup>1777</sup> PONZ, 1772-1792/1988, pp. 325-326.

<sup>1778</sup> GARCIA EJARQUE, Luis *Historia de la lectura pública en España*, Editorial Trea, Gijón, 2000, pp.4-5. Curiosamente el pasillo pertenecía en parte a las monjas de la Encarnación donde se colocó la Biblioteca Real, y en 1729 comenzarían a reclamar sobres sus derechos el sitio donde estaba ocupado las estanterías, por lo que le fue cedido al convento 7.000 reales anuales de los fondos de la misma, añadiendo 2.596 más del tesoro general RUBALCABA BLANCO, Raúl, REDONDO MORALES, Esperanza, GUERRA GARCÍA, Gema, BENITO SANZ, Raquel y CANO RIOFRIO, Cristina, *La Biblioteca Nacional en Documentación de las Ciencias de la Información*, 998, núm.221, pp.158-160.



Cédula de 2 de enero de 1716, recogido en la Novísima Recopilación, libro VIII, título XIX, ley I, ya aparece insertado el carácter de público de la nueva biblioteca, propio de la política de exaltación monárquica, tutelar del como aparece reflejado en el propio Preámbulo: (...) *reconoció que estaban decaídos los antiguos estudios de las buenas letras y demás artes, que son de necesidad y ornamento de las repúblicas, y reconociendo también la aptitud del genio de los españoles para todo género de artes y ciencias, y los progresos que han hecho en ellas, determinó su real ánimo reparar el daño abriendo una pública librería, cuyas puertas estuviesen patentes a todo género de profesores (...) empezó a poner en ejecución la gloriosa idea de la pública librería en su real palacio; porque pudiendo establecerlas en otros sitios, su amor a las letras no quiso permitir que estuviesen distantes.* En el artículo 1 se dispondría que fuera el confesor del Rey el director de la Real Librería, *representándolo en lo que fuere necesario para su estabilidad y permanencia*, por lo que desde 1712 hasta 1761, todos los Directores serían miembros de la Compañía de Jesús. El cargo de bibliotecario mayor sería ocupado por el sevillano Gabriel Álvarez de Toledo y Pellicer de Tovar, que lo ocuparía desde el 1 de marzo de 1712 hasta el 17 de enero de 1714, fecha en que fallecería<sup>1779</sup>. La Real Pública de Madrid contaría con 10.000 volúmenes, la mayor parte confiscados, contando con el privilegio de recibir un ejemplar gratuito de todo libro impreso en los reinos de Felipe V, mediante Real Cédula de 15 de octubre de 1716, y luego con el derecho de tanteo, mediante Real Resolución de 17 de junio de 1750. Su instalación se haría las dependencias del pasadizo que unía el Real Alcázar con el convento de la Encarnación<sup>1780</sup>. El propio Monarca fue el primero que procuró que se hiciese la elaboración de un inventario, como se deduce de la comunicación que el Marqués de Grimaldo envió a Francisco de Roda, Bibliotecario Mayor interino, a lo que contestó el día 23 que no hay índice hecho, sino de solo una tercera parte de libros facultativos, y este no está rigurosamente por abecedario, ni se puede hacer formalmente por ahora, porque no somos más que cuatro bibliotecarios (...), por lo que no sería hasta el 15 de marzo cuando se remitiría el inventario que se había hecho del número de libros, monedas o medallas, instrumentos matemáticos y demás curiosidades (...) <sup>1781</sup>. La idea de abrir una biblioteca pública a imitación de la realizada a instancia del Monarca cuajaría en amplios sectores de la intelectualidad española, surgiendo las bibliotecas episcopales públicas y las de las Universidades, ya a instancia de Carlos III, a los que habría que añadir las de pertenecientes a las Sociedades Económicas Amigos

<sup>1779</sup> GARCIA EJARQUE, Luis “La Real Librería Pública de Madrid bajo la breve gestión de su primer Bibliotecario Mayor, el sevillano Gabriel Álvarez de Toledo y Pellicer de Tovar”, *De libros y Bibliotecas*. Universidad de Sevilla, 1994, pp.138-150-

<sup>1780</sup> GARCIA EJARQUE, Luis *La Real Biblioteca de S.M. y su personal (1712-1836)*, Madrid, Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 1996; La cuestión de las Bibliotecas Nacionales y la difusión de la cultura en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año XIV, Noviembre-Diciembre de 1910, Núms.11 y 12.

<sup>1781</sup> GARCIA EJARQUE, Luis Normativa para la elaboración de los Índices de Impresos en la Biblioteca Nacional. *Reseña histórica* “*Boletín de la Anabad*, Tomo 42, N°1, 1992.



del País<sup>1782</sup>, algunas de ellas con los fondos de las bibliotecas jesuíticas confiscadas.

#### **2.1.2.2. El régimen patrimonialista de los testamentos regios: los bienes vinculados y los bienes privados de la Corona.**

El análisis del testamento del último Austria, Carlos II, nos puede ayudar a abordar la cuestión en la que establece que *en el dicho Palacio que tengo en esta Corte* (se trata del Real Alcázar de Madrid) *como en los demás Alcazares reales que están dentro y fuera de ella y en otras ciudades, villas y lugares, mando que todas las pinturas, tapicerías, espejos y demás menaje con que estén adornados, quede todo vinculado (como desde luego lo vinculo) con todas las fuerzas y firmezas que dispone el derecho y de que para ello uso, para mi subcesor y subcesores en esta Corona y desde luego y para siempre los privi de que puedan dar ni enajenar en manera alguna los dichos alcázares y casas reales, ni ninguna de las cosas que quedaran en ellas*<sup>1783</sup>. La llegada de los Borbones a la Corona Española va a marcar una nueva etapa en el régimen jurídico del Patrimonio Real. En el testamento firmado por la reina Marian de Neoburgo el 17 de septiembre de 1737, sería nombrada heredera a Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V. El legado patrimonial heredado constaría de todos los bienes, *sean muebles o inmuebles; oro, plata; joyas, perlas; vajillas (...)* que en su exilio en Bayona había ido acaparando, y que posteriormente se instalaría en el Palacio del Infantado de Guadalajara hasta su muerte<sup>1784</sup>. Al mismo tiempo las colecciones que habían adquiridos por Felipe V e Isabel de Farnesio serían heredados por los monarcas Fernando VI, Carlos III y Carlos IV sin perder el carácter de patrimonio privado de la Corona<sup>1785</sup>. A la muerte de Felipe V en su **testamento de 10 de enero de 1724** se perfila la distinción entre los bienes vinculados *Mando asimismo y es mi voluntad que anden unidas e incorporadas a la Corona, como lo están y han estado siempre y deben estar, todas las pinturas, tapicerías, bufetes, vasos de pórfido y de otras piedras que se hallen y queden en los cuartos del Palacio de Madrid, y en los otros Palacios y Casas Reales y de campo, excepto las de este de San Idelfonso, sin que puedan enajenar ni separar de ella en todo ni en la más mínima parte, pues usando de la potestad que como Rey y Señor tengo las incorporo y vinculo*

---

<sup>1782</sup> GARCIA EJARQUE, Luís *Historia de la lectura pública en España*, Editorial Trea, Gijón, 2000 pp.15-32.

<sup>1783</sup> *El testamento de Carlos II*. Edición Fascímil, Introducción por Antonio Domínguez Ortiz; *Testamentos de reyes de España: Los Austria*, Madrid, 1982, Vol.5, pp.42-71.

<sup>1784</sup> MARTINEZ LEIVA, Gloria; RODRIGUEZ REBOLLO, Ángel La colección de pintura de la Reina Mariana de Neoburgo en *Goya*, 286, Madrid, 2002, p.46.

<sup>1785</sup> En el caso de la reina Isabel de Farnesio, su legado patrimonial de bienes histórico-artístico esta incluido en la *Liquidación, Partición y Adjudicación de los Bienes efectivamente partibles (...) de la Reina (...) D<sup>a</sup> Ysabel Farnese*. Archivo del Ministerio de Justicia de Madrid, Casa Real, 1776. Su hijo, el infante Don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio (1727-1785), heredaría una amplia colección de pinturas reales. La colección del Infante Don Luis es un claro ejemplo del coleccionismo privado que practicaron los Borbones durante todo el siglo XVIII, ya que a las obras artísticas que heredó de su madre, se uniría las que compraría al marqués de la Ensenada, después de su destitución en 1754. DOMINGUEZ-FUENTES, Sophie, "Pinturas que poseyó Don Luis en la colección del Patrimonio Nacional 1848-1850", *Goya, Revista de Arte*, Núm. 304, Madrid, 2005, pp.45-50.

*en esta Corona, para que por ninguna causa mayor ni menor se puedan separar de ella por Vos el referido Príncipe mi hijo, ni por ninguno de vuestros sucesores. y el dominio privado de los bienes del Patrimonio Monumental, al reconocer como tal al Palacio de San Idelfonso que lo dejará a la Reina, aunque a su muerte, tendrá que volver a vincularlos al Patrimonio de la Corona, por lo que Felipe V se había reservado como bien libre: Y por el grande amor que la he tenido y tengo, la dejo vinculadas, y asimismo le dejo durante su vida este Palacio de San Idelfonso con el Sitio y jurisdicción de él como me lo he reservado en la renuncia por ahora y durante las vidas tuyas y mías (...), y después de ella vuelva a la Corona lo que hubiese salido de ella. En el Codicilo de 2 de junio de 1727 volvería a reiterar la cesión del Palacio de San Idelfonso a la Reina: Dejo a la Reina, mi muy cara y amada mujer, los distritos y territorios de San Idelfonso y Balsaín, con sus respectivos Palacios, alhajas y mueble<sup>1786</sup>.*

El testamento de Fernando VI, otorgado el **10 de diciembre de 1758**, no va a suponer grandes novedades que repercutan en la trayectoria jurídica del Patrimonio Monumental Regio, al dejar prácticamente intacto su contenido<sup>1787</sup>. De gran trascendencia para el futuro del Patrimonio Monumental regio, lo constituiría por el contrario el testamento de Carlos III, el 13 de diciembre de 17, al quedar vinculados a la Corona aquellas adquisiciones de bienes raíces o estables hecha durante su reinado, como son *los pinares de Valsaín, La Moraleda, Palacio de Riofrío y otros semejantes que heredé de mis Padres y Señores Don Felipe V y Doña Isabel Farnesio. Es mi voluntad que todos los bienes referidos, y otros cualesquiera de igual o semejante naturaleza, adquiridos en cualquier manera, por conquista, compra, cesión o herencia, queden incorporados a la Corona, y pasen a mi hijo el Príncipe y demás sucesores en ella, sin división ni separación alguna.(...)* Mando se dé algunas alhajas de las que existan en mi poder, a arbitrios de mi hijo el Príncipe y demás testamentarios, á la Princesa su mujer, al Rey de las dos Sicilias y la suya, a la infanta Gran Duquesa, y a su nieta Doña Carlota, Princesa de Brasil; y quiero que las demás joyas, sacadas estas mandas, queden incorporadas a la Corona en la misma forma que llevo prevenido en cuanto a los bienes estables. De este modo quedaban incorporadas a la Corona las joyas pertenecientes a Carlos III, incluso las adquiridas por título privado. Al mismo tiempo habían quedado desvinculados de la Corona, convirtiéndose en bienes libres las pinturas y los tapices que Carlos II y Felipe V habían declarado inseparables de la Corona<sup>1788</sup>. Cabe mencionar que se realizó una importante labor de inventariación de todos los bienes muebles e inmuebles que había formado

<sup>1786</sup> ANES, Gonzalo *Las colecciones reales y la fundación del Museo del Prado*, Fundación de Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1996, pp.36-37; LOPEZ RODO,

<sup>1787</sup> En realidad las colecciones regias experimentaron un escaso incremento durante el reinado de Fernando VI, tanto en bienes muebles como en inmuebles, en las que se adquirió al duque de Huéscar en 1751 la casa palacio de las Batuecas y al Marqués de Hinojares le compraría el castillo de Viñuelas.

<sup>1788</sup> LOPEZ RODO, Laureano *El patrimonio nacional*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científica, 1954, p.45.

parte de las colecciones regias que había poseído el propio Carlos III, por lo que se puede contemplar como un verdadero precedente de la labor de catalogación se haría con el Patrimonio del Estado en los años de la etapa liberal<sup>1789</sup>.

La llegada de Carlos IV al trono el Patrimonio de la Corona va a sufrir una importante transformación, especialmente por el movimiento desamortizador, por lo que por **Real Cédula de 21 de octubre de 1800** se procedió a la venta de todo el Patrimonio, exceptuando los Palacios y los Sitios Reales, concretamente *de la real fortaleza de la Alhambra de Granada, palacio del Alcázar de Sevilla y demás pertenencias de su jurisdicción en aquellas capitales, por lo que se procederá a la venta en pública subasta de los demás bienes y edificios de la Corona, que no fueran necesarios para la servidumbre de la real persona y de su amada familia (...)*. La causa de la nueva situación jurídica del Patrimonio Real lo subraya Lopez Rodo al anotar como el nuevo papel ideológico que se le asigna al Rey no necesita poseer una amplia hacienda, sino que le basta un mínimo de bienes con que mantener el decoro de su persona y casa. De ahí que los únicos bienes que no van a ser hasta este momento vendidos serán los palacios y los sitios reales, ya que siguen cumpliendo el mismo papel que se le habían otorgados desde su origen. Como capítulo final de este recorrido podemos insertar el convenio de 5 de mayo de 1804 entre Carlos IV y Napoleón, por el que el Emperador Francés se comprometía a pagar al monarca español destronado treinta millones de reales, con cargo del Tesoro de Francia, entregándole en propiedad el sitio de Chambord, con sus cotos, bosques y en usufructo el palacio imperial de Campiegne, a cambio de que Carlos IV renunciase a favor de Napoleón de todos los bienes alodiales y particulares no pertenecientes a la Corona de España, sino de su propiedad privada<sup>1790</sup>. El exilio francés de Carlos IV y su mujer, la Reina María Luisa y el nombramiento como heredero de su hijo Fernando VII va a plantear un conflicto jurídico en cuanto a la posesión de los bienes muebles del coleccionismo regio, especialmente en las llamadas alhajas de la Corona, que partes de ellas se habían consideradas por deseo de Carlos III vinculadas a la Corona, y otro lote como bienes libres que podía disponer a su voluntad el Monarca Heredero. Una vez restablecido la Monarquía española, Fernando VII desde 1814 intentó recuperar las alhajas de la Corona, por lo que solicito de su madre su devolución, petición que fue negada reiteradamente por su propia madre, por lo que tuvo que mediar en el conflicto el propio Embajador de España ante la Santa Sede, Vargas Laguna. Se conoce una carta confidencial escrita por Fernando VII al propio embajador en el año 1817 en el que se insinuaba que entre las joyas que había sacado la Reina se encontraba las que había pertenecido a Carlos III y que había vinculado a la Corona, por lo que el

---

<sup>1789</sup> ANES, Gonzalo, 1996, pp.48-51.

<sup>1790</sup> LOPEZ RODO, L., p.172.

Soberano propuso que se realizase un inventario de las que poseía su Madre, para así evitar las ventas al temerse que la propia Reina pudiera regalar o vender algunas de las piezas. En otra carta firmada por el propio embajador señalaba las dificultades que había encontrado para confeccionar dicho inventario, precisando que las alhajas de la Reina María Luisa formaban parte de su propiedad privada, por lo que se consideraban bienes libres, siendo su marido, la única persona que podía intervenir, derecho que fue contrastado por el propio Fernando VII al considerar que en ese momento era el rey legítimo de España, y las joyas pertenecían a la Corona al estar vinculadas a ella. Al mismo tiempo Carlos IV testificó que las joyas que tenían en poder la Reina eran de su propiedad privada, y que todas las demás habían sido sustraídas por los franceses al haber quedado depositado en el Palacio Real<sup>1791</sup>. En el testamento de la Reina María Luisa, del 24 de septiembre de 1815, que por cierto dejaba como heredero a Godoy, dejaría como legítima a su hijo Fernando *los diamantes y joyas de la Corona*. A su muerte en Roma, el 2 de enero de 1819, el testamento de la Reina se cambió, y en la declaración o disposición testamentaria hecha por Carlos IV en Nápoles el 19 de enero de 1819, expresaría su voluntad de devolverla porque habían salido de la Corona de España. La cuestión no acabaría aquí ya que hasta 1825 se estuvo litigando por las colecciones que habían pertenecido a la Reina Madre, entre ellas parte de las joyas de la Corona<sup>1792</sup>.

## **2.2. Una incipiente tutela pública del Patrimonio Eclesiástico Monumental en la España de los Borbones.**

Al igual que había ocurrido con el Patrimonio Regio Monumental, aquellos bienes que se iban a ser identificadas como vitales para la construcción de la identidad de la emergente Nación dejarían de ser consideradas como meros bienes de interés espirituales, por lo que se genera una concepción pública de los mismos.

### **2.2.1. El debate doctrinal sobre el derecho de la propiedad eclesiástica y su proyección sobre la tutela del Patrimonio Monumental.**

Durante la etapa de los Borbones cambiaría la relación de la Iglesia con la Monarquía a instancia del reformismo ilustrado. La nueva situación está perfectamente sintetizada por Jean-Pierre Dedieu: *Los reyes no estaban desprovistos de medios de presión sobre la Iglesia. Eran los portavoces naturales de los fieles de sus Estados, incluso en materia teológica (...) Designaban, por sus poderes de patronato, gran parte de los clérigos que desempeñaban cargos en el*

<sup>1791</sup> PEREZ DE GUZMAN Y GALLO, Juan “Las alhajas de la Reina”, en *Estudios de la vida, reinado, proscripción y muerte de Carlos IV y de María Luisa de Borbón Reyes de España*, Madrid, 1909, pp.11-224.

<sup>1792</sup> Sobre el proceso judicial que se va a ir desarrollando sobre las disposiciones testamentarias de Carlos IV y su esposa, la Reina María Luisa, ANES, Gonzalo, 1996, pp.59-71.

*aparato de gobierno eclesiástico en sus estados (...) Este equilibrio cambió en el siglo XVIII, en detrimento de la Iglesia. Fue una política deliberada y constante de los Borbones. No se trataba de expulsar la Iglesia de la esfera de lo político, sino de reducir sus intervenciones y sobre todo de ponerlas al servicio del Estado (...) El punto de inflexión lo marcó el concordato de 1753, que traería consigo una extensión del patronato real, al hacerse el soberano el único patronato de la Iglesia de España*<sup>1793</sup>. Una amplia regulación pública sobre los asuntos eclesiásticos se iría desarrollando durante toda la segunda mitad del siglo XVIII, como supuso el plan de reformas de los beneficios y de las órdenes religiosas (1772), la progresiva superposición de la jurisdicción eclesiástica sobre la civil, el plan de reformas de las universidades (especialmente entre 1769 y 1771). Evidentemente, como nuevamente apunta Dedieu *nada de estas medidas se haría contra la Iglesia, sino en su nombre, por mano de un soberano que actuaba como miembro de la Iglesia, conforme a los poderes que estimaba tener de Dios para protegerla desde la sociedad civil*<sup>1794</sup>.

La impronta del poder regio sobre el eclesiástico abriría un verdadero debate en torno a la propia propiedad eclesiástica que va afectar a su propia naturaleza jurídica. Los bienes eclesiásticos van a experimentar una transformación jurídica de indudable importancia, ya que aunque en la mayoría de los casos van a seguir teniendo como objeto primordial ser bienes de interés espiritual, soportes materiales de exaltación a Dios, la Corona va a ir iniciando una política de tutela que aunque con los Austrias ya había iniciado un cierto camino, en este momento se iría a incrementar. El debate acerca de la propiedad eclesiástica se inicia en el siglo XVI y se agudiza en el siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Un grupo doctrinal representa los que critican la amortización eclesiástica, demandando alguna intervención del Estado, bien para poner freno a su incremento continuo, como harán los ilustrados, bien para incautarse del patrimonio eclesiástico y ponerlos en venta, como defendería los liberales. El grupo de los ilustrados estaría encabezado por Campomanes y Jovellanos, y entre los liberales estarían algunos nombres primordiales como Ros, Sempere y Guarino, Martínez Marina y Canga Argüelles. En contraposición a las teorías intervencionistas estarían un grupo de ultramontanos que fundamentando en una lectura subjetiva de la Biblia, en la tradición eclesiástica e incluso en la Escolástica, intentarían demostrar el carácter sacralizado de las propiedades de la Iglesia, como se puede apreciar en los textos de Rafael Vélez, Francisco Alvarado o Pedro Iguaño Rivero, que se enfrentarían con las doctrinas del constitucionalismo gaditano del primer liberalismo. La Iglesia española va a contar con amplias colecciones pictóricas y escultóricas, así como de un gran número de bienes inmuebles, que se fueron generando en virtud de una serie de instrumentos jurídicos como fueron las múltiples herencias o donaciones, realizadas por familias nobiliarias o

---

<sup>1793</sup> DEDIEU, Jean-Pierre, 2011, p.60.

<sup>1794</sup> DEDIEU, Jean-Pierre, 2011, p.62.



burguesas, casas reales, instituciones laicas de carácter religiosas, que patrocinaron las múltiples producciones artistas que llenaron los espacios religiosos de los interiores de las iglesias (Capillas funerarias en honor al alma del difunto, capillas sacramentales), y que acrecentaría el número de bienes muebles e inmuebles, teniendo como su punto culminante en el periodo contrarreformista. Las propias órdenes religiosas, los Cabildos Catedralicios o las Iglesias parroquiales, unido a los patrocinios de los obispos y cardenales, emulando el boato papal del Vaticano adquirieron bajo su propia financiación un gran número de bienes que llegarían a rivalizar con la propia Casa Real. La Iglesia Española, defendía la idea de que la propiedad de los bienes eclesiásticos, entre ellos los históricos-artísticos, no eran propiedad terrenal, sino que su único propietario era Dios, la Virgen o los Santos, tesis que había surgido desde la Edad Media, cuando se refuerza el principio de inalienabilidad al ser considerado que la titularidad de los bienes no se atribuye a la Iglesia, sino a Dios, la Virgen o los Santos, por lo que al no ser considerada la institución eclesial la verdadera propietaria los bienes muebles serán intocables<sup>1795</sup>.

Un grupo doctrinal representa los que critican la amortización eclesiástica, demandando alguna intervención del Estado, bien para poner freno a su incremento continuo, como harán los ilustrados, bien para incautarse del patrimonio eclesiástico y ponerlos en venta, como defendería los liberales. El grupo de los ilustrados estaría encabezado por Campomanes y Jovellanos, y entre los liberales estarían algunos nombres primordiales como Ros, Sempere y Guarino, Martínez Marina y Canga Argüelles. El debate acerca de la propiedad eclesiástica se inicia en el siglo XVI y se agudiza en el siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Un grupo doctrinal representa los que critican la amortización eclesiástica, demandando alguna intervención del Estado, bien para poner freno a su incremento continuo, como harán los ilustrados, bien para incautarse del patrimonio eclesiástico y ponerlos en venta, como defendería los liberales. El grupo de los ilustrados estaría encabezado por Campomanes y Jovellanos, y entre los liberales estarían algunos nombres primordiales como Ros, Sempere y Guarino, Martínez Marina y Canga Argüelles. En contraposición a las teorías intervencionistas estarían un grupo de ultramontanos que fundamentando en una lectura subjetiva de la Biblia, en la tradición eclesiástica e incluso en la Escolástica, intentarán demostrar el carácter sacralizado de las propiedades de la Iglesia, como se puede apreciar en los textos de Rafael Vélez, Francisco Alvarado o Pedro Iguanzo Rivero, que se enfrentarían con las doctrinas del constitucionalismo gaditano del primer liberalismo. La Iglesia española va a contar con amplias colecciones pictóricas

<sup>1795</sup>HERVADA, J. “La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico” *Ius Canonicum*, 2, 1962, pp.434-441; BELTRAN FUSTERO, L. “Rasgos más destacados del régimen jurídico de las propiedades de la Iglesia Católica”, *Jus*, 35, 1962, pp.344-345.



y escultóricas, así como de un gran número de bienes inmuebles, que se fueron generando en virtud de una serie de instrumentos jurídicos como fueron las múltiples herencias o donaciones, realizadas por familias nobiliarias o burguesas, casas reales, instituciones laicas de carácter religiosas, etc, que patrocinaron las múltiples producciones artísticas que llenaron los espacios religiosos de los interiores de las iglesias (Capillas funerarias en honor al alma del difunto, capillas sacramentales, etc), y que acrecentaría el número de bienes muebles e inmuebles, teniendo como su punto culminante en el periodo contrarreformista. Las propias órdenes religiosas, los Cabildos Catedralicios o las Iglesias parroquiales, unido a los patrocinios de los obispos y cardenales, emulando el boato papal del Vaticano adquirieron bajo su propia financiación un gran número de bienes que llegarían a rivalizar con la propia Casa Real. La Iglesia Española, defendía la idea de que la propiedad de los bienes eclesiásticos, entre ellos los históricos-artísticos, no eran propiedad terrenal, sino que su único propietario era Dios, la Virgen o los Santos, tesis que había surgido desde la Edad Media, cuando se refuerza el principio de inalienabilidad al ser considerado que la titularidad de los bienes no se atribuye a la Iglesia, sino a Dios, la Virgen o los Santos, por lo que al no ser considerada la institución eclesial la verdadera propietaria los bienes muebles serán intocables<sup>1796</sup>. En contraposición a las teorías intervencionistas estarían un grupo de ultramontanos que fundamentando en una lectura subjetiva de la Biblia, en la tradición eclesiástica e incluso en la Escolástica, intentarían demostrar el carácter sacralizado de las propiedades de la Iglesia, como se puede apreciar en los textos de Rafael Vélez, Francisco Alvarado o Pedro Iganzo Rivero, que se enfrentarían con las doctrinas del constitucionalismo gaditano del primer liberalismo. La Iglesia española va a contar con amplias colecciones pictóricas y escultóricas, así como de un gran número de bienes inmuebles, que se fueron generando en virtud de una serie de instrumentos jurídicos como fueron las múltiples herencias o donaciones, realizadas por familias nobiliarias o burguesas, casas reales, instituciones laicas de carácter religiosas, que patrocinaron las múltiples producciones artísticas que llenaron los espacios religiosos de los interiores de las iglesias (Capillas funerarias en honor al alma del difunto, capillas sacramental), y que acrecentaría el número de bienes muebles e inmuebles, teniendo como su punto culminante en el periodo contrarreformista. Las propias órdenes religiosas, los Cabildos Catedralicios o las Iglesias parroquiales, unido a los patrocinios de los obispos y cardenales, emulando el boato papal del Vaticano adquirieron bajo su propia financiación un gran número de bienes que llegarían a rivalizar con la propia Casa Real. La Iglesia Española, defendía la idea de que la propiedad de los bienes eclesiásticos, entre ellos los históricos-artísticos, no eran propiedad

---

<sup>1796</sup>HERVADA, J. “La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico” *Ius Canonicum*, 2, 1962, pp.434-441; BELTRAN FUSTER, L. “Rasgos más destacados del régimen jurídico de las propiedades de la Iglesia Católica”, *Jus*, 35, 1962, pp.344-345.

terrenal, sino que su único propietario era Dios, la Virgen o los Santos, tesis que había surgido desde la Edad Media, cuando se refuerza el principio de inalienabilidad al ser considerado que la titularidad de los bienes no se atribuye a la Iglesia, sino a Dios, la Virgen o los Santos, por lo que al no ser considerada la institución eclesial la verdadera propietaria los bienes muebles serán intocables<sup>1797</sup>.

Los bienes eclesiásticos del Patrimonio Monumental comienzan a ser considerados en muchos casos bienes de interés histórico-artístico, que aunque en su régimen jurídico de propiedad pertenezcan a las comunidades religiosas, en el fondo comienza a ser identificado con la esencia de la cultura española, especialmente porque muchos de estos edificios o colecciones de pinturas y esculturas estaban siendo revalorizado en virtud del valor que los propios artistas estaban teniendo tanto en el mercado artístico como en la erudición. La Monarquía, consciente de este hecho, va a comenzar a tutelar con algunas disposiciones la conservación de los bienes eclesiásticos, por lo que poco a poco se va a producir un hecho evidente: colecciones privadas pertenecientes a comunidades religiosas que son sus legítimos dueños, van a ser limitada en su libre disposición de los mismos, al ser considerada pertenecientes a un patrimonio que se identifica con lo español. Algunos autores fundamentan este hecho en la política del regalismo, un movimiento intelectual, que va a ir preparando el concepto de independencia y de soberanía nacional, que culminaría con el Concordato de 1753, y que le llevará a enfrentarse posteriormente con los jesuitas.

### **2.2.2. Un ensayo del proceso de nacionalización del Patrimonio Monumental Eclesiástico y su proyección en la conservación de los bienes de interés histórico y artístico.**

#### **2.2.2.1. El destino de los bienes de la Compañía de Jesús a raíz de las medidas confiscatorias del reinado Carlos III.**

Sin embargo, la medida más trascendental en el ámbito de la intervención estatal sobre los bienes eclesiásticos del Patrimonio Monumental lo va a representar los acontecimientos que van a llevar a la Corona a expulsar a la Compañía de Jesús. La **Pragmática de 2 de abril de 1767** promulgada por Carlos III, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, abría un nuevo capítulo en la historia de la tutela regia sobre el Patrimonio Monumental. Sin detenernos en las causas de la medida real, que se encuadra en el proceso final de las nuevas y las difíciles relaciones entre la Iglesia y el Estado mantenida desde los primeros Borbones, hasta la etapa de Carlos III<sup>1798</sup>, la expropiación

<sup>1797</sup> HERVADA, J. 1962, pp.434-441; BELTRAN FUSTER, L. 1962, pp.344-345.

<sup>1798</sup> Sobre la expulsión de los jesuitas en España, EGIDO, T. Motines de España y proceso contra los jesuitas. La pesquisa reservada de 1766 *Estudios Agustiniano*, XI, Madrid, 1976, pp.219-228; Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII *Historia de la Iglesia Española (siglos XVII-XVIII)*, T.IV, Madrid, 1979; “La expulsión de los jesuitas en España” *Historia de la Iglesia Española* T.IV, Madrid, pp.745-792; EGIDO Y PINEDO, *Las causas*

de los bienes muebles e inmuebles, en gran número de gran valor histórico y artístico y su conversión en bienes nacionales se convierte en uno de los episodios claves en el camino de la configuración del Patrimonio Histórico-Artístico, verdadero ensayo de las desamortizaciones posteriores, que desde Godoy hasta los posteriores gobiernos liberales lo extendieron a todas las instituciones religiosas. La historiografía artística ha centrado en amplia medida sus miras en el estudio del amplio número de bienes e inmuebles de carácter histórico-artísticos cambiaron su destino inicial. Como apunta Carlos Martínez pronto se vio la necesidad de sacar del proceso de venta las obras pictóricas originales de autores españoles y extranjeros, por lo que se el Consejo, en su **Orden Circular del 16 de septiembre de 1767, mandaría la suspensión de venta de este tipo de obras de arte y la remisión de una lista en la que constatasen las existentes en cada colegio.** Debido a que los comisionados no estaban capacitados para valorar la impronta de estas obras, sería el pintor de cámara, Anton Rapahael Mengs, el que propusiera que estas obras debían de ser reconocidas, tasadas y separadas del resto de posesiones por un sujeto capaz de desarrollar esta labor con acierto, por lo que el Consejo Extraordinario celebrado el 25 de abril de 1769 elegiría a Antonio Ponz para este cometido. Una serie de disposiciones irían apareciendo a este fin como la del 8 de julio de 1769, la Nueva Circular a los comisionados sobre Pinturas y otras cosas de las nobles artes<sup>1799</sup>. De esta manera se irían confeccionando inventarios, y se procedió a la venta en pública licitación de las pinturas y esculturas que no fueran necesarias en los colegios o iglesias que se conservaron. Todas estas las obras se clasificaron en tres grupos. Primero, los que nuevamente habían de aplicarse al culto, designados con el nombre de jocalias (alhajas); segundo, los reservados por el Consejo de Castilla para formar en Madrid una galería de arte, y tercero, los enajenables por medio de

---

*gravísimas y secretas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III*, Madrid, 1994. FERRER BENIMELI, J.A. Carlos III y la extinción de los jesuitas *Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración*, Madrid, Vol. I, pp.239-259; GIMENEZ LOPEZ, E. *Expulsión y exilio de los jesuitas españoles*, Alicante, 1997; José Moñino y la extinción de la Compañía de Jesús Catálogo de la Exposición Floridablanca 1728-1808 La utopía reformadora. Murcia 18 septiembre/8 de diciembre de 2008, pp.73-83. HERNANDEZ FRANCO, Juan Regalismo y reformismo al servicio de la Monarquía de Carlos III: José Moñino durante sus años como fiscal del Consejo de Castilla (1766-1772), Catálogo de la Exposición Floridablanca 1728-1808 La utopía reformadora. Murcia 18 septiembre/8 de diciembre de 2008, p.62. Juan Hernández Franco *señala como los excesos de la teología probabilista, su concepto de autoridad y gobierno, su acción misional en América, en concreto las llamadas reducciones de Paraguay, que se entendía como el propósito de fundar allí un estado independiente; la acumulación de fincas rústicas, que quería que estuviesen exentas de pagar diezmo... y, finalmente, la participación de algunos jesuitas en el Motín de Esquilache, hizo que conjunto a los hijos de San Ignacio desde el aparato monárquico se les considerase peligrosos y enemigos de la corona y del reino.*

<sup>1799</sup> MARTINEZ TORNERO, Carlos A. *Carlos III y los bienes de los jesuitas. La gestión de las temporalidades por la Monarquía Borbónica (1767-1815)*, San Vicente de Raspeig, Universidad de Alicante, 2010, pp.115-116.

pública subasta<sup>1800</sup>. En el caso de los inmuebles, la mayoría de los edificios religiosos, iglesias y oratorios como casas pasarían a propiedad de la Corona. El propio Monarca Carlos III se convirtió en un comprador de las obras que habían pertenecido a la Compañía de Jesús por parte de la Corona se convertiría en una práctica habitual, como ocurrió en el caso de las pinturas de la casa profesa de los jesuitas de Madrid<sup>1801</sup>. De esta forma, el rey Carlos III una vez que va a ceder a los oratorianos de San Felipe el templo y la Casa Profesa, aprovecharía para intentar adquirir algunas de las pinturas más importantes mediante compra de las mismas. Para ello enviaría a un tasador personal, el pintor Antonio Rafael Mengs, para que seleccionase y tasase las que considerara más importantes. Se tiene constancia documental que la adquisición de las obras fue muy rápida, ya que el 15 de enero de 1768, solo dos días después de la ocupación del edificio por los regulares de San Felipe Neri y el 2 de febrero ya estaban pagadas las pinturas que pasaron a las colecciones reales<sup>1802</sup>. Los antiguos bienes muebles e inmuebles del Colegio Imperial regentado por los jesuitas, se fundaría los Reales Estudio de San Isidro, cuya biblioteca estaría formada con los libros requisados.

Una de las colecciones más significativas perteneciente a la Compañía de Jesús fue la correspondiente a la de la ciudad de Sevilla. Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta principio del siglo XVIII, los jesuitas habían ido reuniendo un amplio patrimonio tanto mueble como inmueble, que encerraban sin duda alguna unos valores históricos y artísticos de primer orden, probablemente sin parangón con las órdenes mendicantes, donde habían intervenido una amplia nómina de artistas de primera categoría de la escuela barroca sevillana. No es mi propósito hacer aquí un estudio del patrimonio histórico-artístico de la Compañía de Jesús en el ámbito local hispalense, pero sí me parece interesante detenernos en el procedimiento institucional que se llevó a cabo a la hora de tutelar los bienes confiscados<sup>1803</sup>. Cabe puntualizar el tratamiento diferenciador que se dio a los bienes muebles e inmuebles. En cuanto a éstos, en 1766, en virtud de la medida, los inmuebles del Colegio de San Hermenegildo, La Casa Profesa, el Noviciado de San Luis de los

<sup>1800</sup> “Una subasta de obras de arte en el siglo XVIII. Pinturas y esculturas pertenecientes a la Compañía de Jesús en Valencia”, *Archivo de Arte Valenciano*, Año II, n.3. Valencia, 30 de septiembre de 1916, pp.94-100.

<sup>1801</sup> MIGUEL ALONSO, A “Los bienes de la Compañía de Jesús incautados en Madrid en 1767 y 1835 y conservados en la Universidad Complutense”, en F.J. Campos y Fernández de Sevilla (ed.), *Actas del Simposium: la desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España*, Instituto Ecurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas. Madrid, 2007.

<sup>1802</sup> SANCHEZ LOPEZ, Andrés “La casa profesa de los jesuitas en Madrid”, *Archivo Español de Arte*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, Volumen LXXX, N° 319, julio-septiembre, 2007, pp.278-279.

<sup>1803</sup> LOPEZ MARTINEZ, Antonio Luis “El patrimonio económico de los jesuitas en el reino de Sevilla y su liquidación en tiempos de Carlos III” *Archivo Hispalense*, 1988, Tomo LXXI, Núm 217, pp. 37-55.

Franceses, el Colegio de las Becas y el llamado Colegio de los Chiquitos pasarían a propiedad de la Corona, por lo que el carácter religioso de estos edificios pasarían a convertirse en inmuebles civiles. Los Colegios jesuíticos en Sevilla, que habían protagonizado la vida académica de la ciudad, serían cerrados y expropiados, como el Colegio de los Ingleses y el de los Irlandeses, e incluso el Seminario Diocesano. El destino de estos inmuebles, su nuevo uso, sería plasmado en la Real Orden de 31 de mayo de 1768, tras oír el parecer de la comisión local compuesto por el asistente Olavide, por el entonces Arzobispo de Sevilla, Cardenal Solís, y por el Regente de la Audiencia de Sevilla, el Marqués de Llanos. Algunos inmuebles serían adquiridos por instituciones civiles, como fue el caso de la adquisición del ex colegio de San Gregorio por la Real Academia de Medicina, que la convertiría en su sede, la Casa Profesa quedó para Universidad Literaria, San Luis a seminario diocesano, el Colegio de las Becas sería utilizado como colegio para niños nobles, los irlandeses para niñas nobles y el de Chiquitos para estudio elemental de gramática. Sin embargo, todavía diez años después algunos bienes inmuebles no habían encontrado destinos definitivos, como expone el propio Conde de Águila en la correspondencia con Antonio Ponz, y otros como el antiguo Colegio de San Gregorio había pasado a ser sede de la Real Academia de Medicina. La administración de los bienes muebles compuesto por una amplia producción pictórica y escultórica sería realizada por un comisionado real, en este caso el académico e historiador Antonio Ponz, que llegaría a Sevilla en 1768<sup>1804</sup>. La trascendencia primordial de la nueva situación creada respecto a estos bienes vendría dada por la disposición de Carlos III al seleccionar unos bienes artísticos para cederla a la recién creada Academia de Tres Nobles Artes de Sevilla, quien las trasladaría al Alcázar para ser expuestas en sus salas. Como bien apunta Ignacio Cano, es interesante constatar que el nuevo valor que a partir de entonces se otorgó a la obra de arte desde los poderes públicos sería su carácter pedagógico al mismo tiempo que como el propio Ponz señala estas obras se instalaron en el Alcázar, no precisamente para el disfrute del Rey o de determinadas personas, sino *para adorno y servir en el estudio de las artes en Sevilla*<sup>1805</sup>.

Al mismo tiempo que fueron nacionalizados los bienes históricos-artísticos de la extinguida institución jesuítica, sus antiguas bibliotecas<sup>1806</sup> fueron confiscadas por lo que se daría el primer ensayo desamortizador en el

---

<sup>1804</sup> CARRIAZO, J. de M. "Correspondencia de Don Antonio Ponz con el Conde de Águila" *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 13 Carta VII, p.159.

<sup>1805</sup> CANO RIVERO, Ignacio "Ver para aprender. La primera Galería Pública de Sevilla en el Alcázar (1770-1807). Aires Ilustrados en Sevilla" *MUS-A* Año I, Nº01, febrero, 2003, p.26.

<sup>1806</sup> "Sobre las antiguas bibliotecas de la Compañía de Jesús, BARTOLOMÉ MARTINEZ, Bernabé Las librerías e imprentas de los jesuitas (1540-1767)" *Hispania Sacra: Revista de la Historia Eclesiástica de España*, Vol.40 (enero-junio 1988), pp.315-388.



ámbito del Patrimonio Documental<sup>1807</sup>, donde se establecerían dos fases en el proceso de promulgación de disposiciones normativas, siendo la primera introductoria, donde aparecería normas que incluirían aspectos referidos a archivos, libros y bibliotecas, que aparecerían recogidas en la Instrucción de lo que deberán ejecutar los comisionados para el extrañamiento y ocupaciones de bienes, firmada por el Conde de Aranda el **1 de marzo de 1767**, a la que se unirían la **Real Cédula dada en 22 de abril de 1767**, elaborada por Pedro Rodríguez Campomanes, estableciéndose en su artículo XXIV que se destinase los antiguos fondos bibliográficos en las poblaciones donde existiera universidades, aunque en menor medida serían destinados a conventos, seminarios y bibliotecas episcopales, a la que posteriormente se uniría<sup>1808</sup>. El **29 de julio de 1767** se enviaría una segunda Circular a los comisionados de temporalidades, de claro contenido técnico, que se completaría con una **Real orden de 2 de mayo de 1769**, en el que se dispondría que las juntas municipales que se asegurasen que las bibliotecas de los colegios se encontrasen bien custodiadas y ubicadas en lugares que no contribuyese a su deterioro, pues debían de ser aplicadas, como norma general, a favor de las universidades y casas de estudios<sup>1809</sup>. Un proyecto elaborado por Manuel Ventura de Figueroa, colector general interino de expolios, sobre el destino que debía darse a los libros de las bibliotecas de los jesuitas expulsos, sería aprobado por la **Circular de 17 de diciembre de 1770**, disposición que sería enviada por el 4 de enero de 1771<sup>1810</sup>. El Consejo Extraordinario dispuso la confección de una **Instrucción con fecha de 27 de abril de 1772 que debían observarse por las respectivas Juntas Provinciales, y Municipales en la entrega de las Librerías, que quedaron en las varias Casas, Colegios, y Residencias que los Regulares de la Compañía tuvieron en estos Reinos**. Una de las medidas más importante en el proceso de nacionalización de los fondos bibliográficos fue la fundación de la Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro, a raíz de la promulgación del Real Decreto de 19 de enero de 1770, por lo que se dispuso mediante el procedimiento administrativo de convertir en publica la antigua biblioteca jesuítica, por lo que desde ese momento se destinaba *para el uso de los maestros y profesores, y de sus discípulos, como para el común de los demás estudiosos que quieran concurrir a ella*. La nueva institución no abriría hasta el 20 de enero de 1786, como una instancia pública de patrocinio real<sup>1811</sup>. Otras antiguas bibliotecas procedentes

<sup>1807</sup> EGUIA RUIZ, Constancio “Los jesuitas, proveedores de bibliotecas. Recuento de muchos expolios” *Razón y Fe*, 130, 1944, pp.235-258.

<sup>1808</sup> Colección general de providencias sobre el extrañamiento y ocupación de temporalidades de la Compañía de Jesús por Carlos III. Madrid, Imprenta Real de la Gracia, 1767.

<sup>1809</sup> GARCIA EJARQUE, Luis, 2000, p.16.

<sup>1810</sup> VERGARA, Javier, “Inventario y expropiación de la biblioteca de los jesuitas de Pamplona”, HERNÁNDEZ PALOMO, José J.; DEL REY FAJARDO, José del *Sevilla y América en la Historia de la Compañía de Jesús*, Colección Estudios, Córdoba, 2009, pp.375-379.

<sup>1811</sup> MIGUEL ALONSO, Aurora *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992, tesis doctoral.



de las antiguas sedes jesuíticas pasarían a la propiedad de las distintas universidades como fueron el caso de la antigua librería del colegio de San Pablo que se incorporaría en la Biblioteca de la Universidad de Granada<sup>1812</sup>.

Las consecuencias del proceso desamortizador en el caso de la Compañía de Jesús son trascendentales en el camino de la intervención administrativa de los poderes públicos y una entidad privada como era la Compañía de Jesús, aunque perteneciente a la Iglesia Católica:

1º) Se produce un proceso de nacionalización de patrimonio histórico-artístico, por el que un grupo de bienes de propiedad eclesiástica pasan al Patrimonio de la Corona, identificada a su vez con el Estado. No fue en realidad el objetivo primordial de la medida regia, como después ocurriría en la desamortización, pero sí es cierto que provocó la situación que estamos describiendo.

2º) Se puede apreciar una relectura de los valores que encierran los bienes muebles que habían pertenecidos a la Compañía de Jesús, ya que no se consideran exclusivamente como bienes de interés espiritual, sino que se plantea una revisión de los valores patrimoniales que encierran en sí, al considerarlos ya expresión de unos valores históricos y artísticos, resultado de la nueva mentalidad ilustrada. Se ha abierto el camino hacia la descontextualización y la atemporalidad que caracteriza al futuro bien cultural.

3º) El destino de la mayoría de estos bienes muebles no es pertenecer exclusivamente al patrimonio personal del Monarca, sino que se instalan galerías públicas para que los ciudadanos puedan valorarlas, por lo que se va a insertando la función pedagógica propia de la mentalidad ilustrada de la obra de arte. Se inicia el camino al carácter público del Monumento Histórico-Artístico que se culminara en el proceso revolucionario francés, y en el caso español en los distintos regímenes liberales del siglo XIX.

#### **2.2.2.2. Un ensayo desamortizador en el reinado de Carlos IV: La Real Orden de 25 de septiembre de 1798 y el proyecto frustrado de un museo nacional de bienes religiosos.**

La promulgación de la **Real Orden de 25 de septiembre de 1798** se considera por parte de la historiografía el verdadero inicio de la política desamortizadora que se va a producir en la configuración inicial del Estado Liberal, al mandar enajenar todos los bienes fundos pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordias, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias y obras pías y patronatos de legos. No sabemos a ciencia cierta cuál el resultado que produjo en el ámbito de los bienes de interés histórico y

---

<sup>1812</sup> MATEU IBARS, Josefina “La antigua librería del Colegio de San Pablo en el siglo XVIII: un principal fondo de la Biblioteca de la Universidad de Granada”, *Cuadernos de Estudios medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas*, 17, 1992, pp.265-277.

artístico que pertenecieran a estas instituciones, ya que como señala Antigüedad del Castillo falta ahondar en la política de Estado de esos años. Subyace la idea de que en el fondo se pretendía formar un museo con los bienes artísticos nacionalizados, que aunque se carece de pruebas concluyentes se deducen de las medidas adoptadas por el Primer Secretario de Estado de Carlos IV, Mariano Luis de Urquijo (1768-1817), para lo que solicitó con la promulgación de la Real Orden de 1 de septiembre de 1800 a la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla los famosos cuadros de Murillo, con el fin de integrarlas en una galería de obras maestras españolas cuyo emplazamiento estaría en el ala que debía terminarse del Palacio Real madrileña. La Junta de Gobierno de la Hermandad se opondría rotundamente, por lo que el museo no salió adelante<sup>1813</sup>, por lo que estaba antes un hecho contundente digno de destacar: El Estado Monárquico a diferencia de lo que pudo ocurrir con los bienes nacionalizados de algunas confesiones religiosas, tendría amplias dificultades en la libertad de disposición sobre las instituciones religiosas de carácter privado como fue el caso de las cofradías y hermandades. A los cuadros de Murillo del Hospital de la Caridad, se quiso unir la pintura de Pedro de Campaña, el descendimiento<sup>1814</sup>. En una misma línea podríamos citar el caso de la adquisición por Carlos IV del retablo de San Esteban de Valencia pintado por Juan de Juanes, que no pudo terminar de adquirirlo.

**2.2.3. La tutela pública de la restauración inmobiliaria, especialmente los religiosos: Los Reales decretos de 23 y 25 de noviembre de 1777 por el que la Real Academia de San Fernando alcanzaba el control de los edificios públicos.**

La política de tutela regia que había realizado sobre el Patrimonio Eclesiástico hunde sus raíces en la etapa medieval en los llamados patronatos

<sup>1813</sup> GOMEZ YMAZ, Manuel “El príncipe de la Paz, la Santa Caridad de Sevilla y los cuadros de Murillo”, *Estudio de erudición española. Homenaje a Menéndez y Pelayo*, Madrid, 1988, 2. Vol. I, pp.807-827;

<sup>1814</sup> SERRERA, Juan Miguel, “Coleccionismo regio e ingenio capitular” *Archivo Hispalense*, 215, 1987, pp.153-166. El Cabildo Catedralicio en su reunión del 2 de agosto de 1800 procedió a leer el oficio del Provisor dirigido al Visitador de Capillas en el que se daba traslado de la Real Orden que al respecto Carlos IV dio a por entonces Arzobispo de Sevilla, el Infante Cardenal Don Luis de Borbón. En ella se decía que se entregase a Don Francisco Agustín, Pintor de Cámara de S.M., el Descendimiento de Campaña que se conservaba en la iglesia de Santa Cruz, cuyo lugar vendría a ocupar una copia del mismo tamaño que ejercitara Agustín (...) Lo primero que los capitulares hicieron tras conocer la petición del Rey fue dilucidar si el tema competía a la Diputación de Hacienda o a la de Negocios, disyuntiva resuelta mediante una votación favorable a la de Hacienda. Éste emitió un primer informe en el Cabildo del 18 de este mismo mes, basado, fundamentalmente, en el oficio remitido a esa Diputación por el Visitador de Capillas. En él se desaconsejaba mover el cuadro de Campaña, ya que su estado de conservación no se lo permitía (...) A la vista del Informe, los capitulares en su reunión del 19 del mes siguiente, tras considerar que el tema era de gran importancia y que requería suma prudencia y delicadeza, decidieron que se valdrían de todos los medios posibles para impedir que se cumpliera la orden del Rey. Después del Informe que el pintor Agustín, encargado de hacer una copia del cuadro de Campaña, el Rey Carlos IV dispondría que no se tocara el cuadro y que siguiera adelante en el desempeño de su misión, la recogida de los cuadros de la Caridad.

reales, por lo que de la Hacienda Real se comprometía a ayudar económicamente a la comunidad monástica, prosiguiendo esta práctica durante la etapa de los Borbones, especialmente en las políticas de restauración de aquellos conventos de potestad regia que se encontrasen en ruinas, como fue el caso del monasterio de San Jerónimo de Madrid, que fue objeto de intervención estructural del edificio a expensas de las arcas del Estado<sup>1815</sup>. Carlos III va a promulgar algunas medidas proteccionistas de los bienes eclesiásticos del Patrimonio Monumental, poniéndose de esta manera las bases de intervención pública en una propiedad específica como la eclesiástica, que dio origen a conflictos de competencias que se prolongarían durante todo el siglo XIX. Para llevar a cabo estas intervenciones el Monarca Ilustrado contaría con una eminente nueva institución, la Real Academia de San Fernando de Madrid, nacida el 12 de abril de 1752 durante el reinado de Fernando VI, símbolo del centralismo administrativo promovido por los Borbones, en este caso en el ámbito estético, desempeñando la función de vigilar cualquier obra que se realizase en los inmuebles de propiedad eclesiástica de interés histórico y artístico. Cabe mencionar como en los primeros momentos de su creación la Academia no tuvo como objeto primordial la conservación y restauración de los edificios y obras de arte del país, ya que se dedicaría a organizar la práctica docente de las “Tres Nobles Artes” así como los profesores y miembros que debían constituirlos, por lo que no sería hasta 1756 cuando comenzarían realmente a manifestar su preocupación por conservar y propagar las antigüedades y monumentos expuestos a desaparecer. Los primeros edificios que la Academia de San Fernando va a tener un verdadero interés de protección monumental serían la Alhambra y el Palacio de Carlos V en Granada, y el Palacio de Aranjuez, aunque no abordándose ningún tipo de intervención<sup>1816</sup>. Los primeros pasos de su posición administrativa como órganos regios aparecen reflejados en sus propios estatutos de 1752, por lo que siguiendo los estudios de Calvo Serraller entre sus ocupaciones contarían la regulación y el control de la enseñanza artística a través de una imposición de los gustos estéticos clasicistas, la dirección de la investigación historiográfica y sobre todo la responsabilidad directa en la conservación y restauración del patrimonio monumental<sup>1817</sup>. Posteriormente, en el año 1761, conseguirían del Rey que un arquitecto de la Academia supervisara las construcciones municipales, las iniciadas por los capítulos catedralicios y a los arquitectos propuestos. Una normativa posterior reforzaría el papel de la Academia, por lo que en 1768 se establecería que su

---

<sup>1815</sup> CADIÑANOS BARDECI, Inocencio “Los claustros del monasterio de San Jerónimo el Real” *Goya*, Volumen LXXX N° 319, julio-septiembre, 2007, Madrid, pp.255-257.

<sup>1816</sup> ALBAIZA BLANCA SOLER, Silvia “La Academia y la conservación del Patrimonio” en *Academia* Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, segundo semestre de 1999, Número 89, pp.28-29.

<sup>1817</sup> CALVO SERRALLER, F. *Las academias artísticas en España* en N. PEVSNER: *Las academias de arte*, Madrid, 1982, pp. 209-239. ARRIBAS, F. *La protección al patrimonio artístico nacional en el siglo XVIII* en BSAA, VI (1939-1940), pp.237-238.

Informe fuera imprescindible para realizar cualquier tipo de intervención en portadas, retablos o fuentes públicas.

De esta manera podríamos contemplar la **Real Cédula de 21 de octubre de 1773**, por la que *en las iglesias del reyno de Granada no se execute obra alguna sin Real licencia, y demás requisitos que se previenen*, reclamando además los dibujos y diseños de las obras a ejecutar, con el fin de que fueran sancionados por los arquitectos municipales. En la *Reformatione* del Concilio de Trento ya había establecido la responsabilidad de los obispos en *reparar y reedificar* las iglesias parroquiales arruinadas, mediante la inversión de las rentas parroquiales, y en caso de que no pudiera asumir el gasto, las reparaciones *serían transferidas a las iglesias matrices, o a las más cercanas, con facultad de convertir, así las dichas parroquiales como las otras arruinadas, en usos profanos que no sean indecentes, erigiendo no obstante una cruz en el mismo lugar*.

Una de las principales actividades de la gestión patrimonial de la protección patrimonial en la segunda mitad del siglo XVIII, fue la política de restauración que se fue produciendo, teniendo como instrumento vital a la Academia de San Fernando de Madrid, nacida en 1752, bajo los auspicios de Fernando VI, que en la mayoría de las veces se buscaba implantar el nuevo gusto estético del clasicismo, lo que en muchas ocasiones llevaría a una intervención errónea de la conservación del patrimonio, desvirtuándose en muchas ocasiones los vestigios de la arquitectura gótica, muy en la línea de una falta de rigor científico<sup>1818</sup>. Ante estas convicciones estéticas, no podemos sorprendernos de la ausencia de una normativa específica que defendiera en su originalidad aquellos elementos que se considerasen vitales en un edificio, como posteriormente ocurriría en el siglo XIX. No obstante, ya encontramos en Bosarte algunas concepciones conservacionistas que están precediendo a las notas prerrománticas de principio de finales del siglo, y que nos llevaría a una nueva concepción restauracionista, que inspiraría la normativa decimonónica: *La Historia de las Artes debe quedar dotada, y tanto lo bueno como lo malo pertenece a la Historia del Arte, cada cosa para su fin. Un edificio, u otra obra del Arte ya hecha tiene un cierto derecho a existir. Las correcciones y las enmiendas de otras escuelas no le pertenecen. Ni las pinturas se han de retocar, como quiere el vulgo; ni las arquitecturas se han de alterar, como celosamente quieren los profesores eruditos. Solamente se justifica la destrucción de alguna parte del edificio en caso de necesidad*. En este sentido critica la destrucción de las arquivoltas de las puertas de la fachada de la Catedral de Burgos para ubicar una portada neoclásica: *los adornos del estilo gótico no deben picarse ni raerse, pues con semejante operación se defrauda a la historia del arte de sus testimonios auténticos, que son la existencia misma del cuerpo de sus obras*. Así el edificio debía de ser

<sup>1818</sup> GARCIA MELERO, J.E. “Realizaciones arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XVIII en los interiores de las catedrales góticas españolas” *Espacio, Tiempo y Forma*, Madrid, 1989. pp.238-242.

respetado en su integridad, por lo que cabía la posibilidad de continuar el estilo en su estado primitivo, por lo que la utilización del estilo clásico solamente debía de utilizarse cuando no desvirtuara el conjunto de su estructura.

Durante estos años la Academia de Bellas Artes entabló bajo el apoyo prestigioso del propio Monarca una amplia polémica especialmente con dos instituciones que iría perdiendo fuerza paulatinamente: el Consejo de Castilla, en calidad de organismo político superior, que perdería definitivamente el poder sobre las Bellas Artes y los gremios, asociaciones profesionales de raíces medievales, que serían desplazados en la vida tutelar de las artes en este momento. Los objetivos perseguidos por la Academia en estos años sería doble: asegurarse el control de la enseñanza artística e imponer el gusto clasicista como lenguaje estético de los Borbones<sup>1819</sup>. Sin embargo, se conoce una amplia disposición normativa sobre las actividades de la Academia, que ha sido recogida por Miguel Ángel López Utrillo, que ya analiza que en los propios Estatutos de 1752 establecía como una de sus obligaciones preeminentes era la de vigilar y proteger el patrimonio mueble e inmueble. Nadie duda de su papel vital en la intervención de la arquitectura, como se observa en la normativa de 1761, donde se estable que un arquitecto de la Academia supervisara las construcciones municipales, consiguiéndose que en 1768 su informe fuese imprescindible para realizar cualquier tipo de intervención sobre portadas, retablos, o fuentes públicas. Por fin, se promulgarían dos importantes decretos en este sentido: los del 23 y 25 de noviembre de 1777, por el que la Academia tendría el control total de los edificios, incluidos los de la propia Iglesia. Como apunta Claude Bédarid la Academia *consigue en 1777 el dominio de la arquitectura*, ya que apenas tres meses se promulgarían dos reales decretos, el del **23 y el del 25 de noviembre** por el que la Academia alcanzaba el total control de los edificios públicos, incluso los de la propia Iglesia, después que le enviasen una súplica al Rey el 14 de agosto de 1777, con el título Consulta al Rey sobre la arquitectura de los templos. El instructor de estos Decretos sería el Conde de Floridablanca, un político reformador, amante de las artes. En el primer decreto, el Conde de Floridablanca expresaba la decisión del Rey a favor de la Academia, que a partir de ese momento, debía controlar todos los planos de los edificios públicos construidos con los fondos del Estado, mientras que en el segundo fue dirigido a los obispos y demás prelados en el que se explicaban los motivos por los que se había llegado a esta situación. Antes de emprender ninguna obra, los ayuntamientos, magistrados y obispos tenían que pedir autorización a la Academia, por lo que se había abierto el camino hacia la monopolización de la arquitectura.

---

<sup>1819</sup> GARCIA MELERO, Enrique “Orígenes del control de los proyectos de obras públicas por la Academia de San Fernando (1768-1777)” *Espacio, Tiempo y Forma*, en Serie, VII, Hº del Arte, T.11, 1988, p.287-342.



**La Circular de 25 de noviembre de 1777** se inserta en la política tutelar de los bienes eclesiásticos por parte de la Monarquía, precedente de la confrontación que va a mantener la Iglesia y el Estado por la política de restauración de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico durante el periodo liberal. Podemos contemplar como precedente la **Cédula de 21 de octubre de 1773**, incluida en la Novísima Recopilación, en la que se establecía que las reparaciones de templos efectuados en el Reino de Granada sean supervisadas por su Consejo de Cámara, ya que pertenecían al Patronato Real. Se delimitaba la acción del Obispado de Almería que *estaba construyendo, ampliando y reparando varias iglesias de orden de aquel Reverendo Obispo, executándose al mismo tiempo retablos para algunas de ellas sin mi Real Orden, consentimiento ni aprobación que debía preceder, como Patrono que soy de todas ellas*, por lo que se estaba ya invocando la supremacía de la potestad regia sobre los bienes de interés histórico y artístico perteneciente a la Iglesia, por lo que mi Consejo de la Cámara *le hiciese cesar dichas obras, y que no precediese a hacer ninguna de las Iglesias de su diócesis sin expresa orden mía, a menos que no fuesen algunos reparos que ocurriesen urgentes y precisos; y que remitiese los planos y diseños executados, tantos por las obras de Arquitectura, como para las de Escultura, que se estaban construyendo y había proyectadas para las dichas Iglesias*. De esta manera especificaba que *deseando evitar para lo sucesivo semejantes defectos, que redundan en perjuicio de los dueños de la obra y de la buena Escultura y Arquitectura; he tenido por bien dar la presente mi Real Cédula por la que mando no se haga ni execute obra alguna, así de Escultura como de Arquitectura, en toda y cada una de las iglesias del obispado de Almería y en las demás de todo el Reyno de Granada (a no ser los reparos muy urgentes y de poco coste), sin que primero se hayan enviado a mi Consejo de la Cámara los dibuxos y diseños, con la correspondiente justificación de la necesidad y utilidad que se considere en las iglesias respectivas, para que, haciéndolos reconocer por los mejores artífices de Madrid, recaiga mi Real aprobación y licencia*.

Siguiendo prácticamente la misma tónica sería promulgada la **Circular de 25 de noviembre de 1777, insertada en la Novísima Recopilación**, a las autoridades eclesiásticas estableciendo la conveniencia de que las obras de reparación de los templos sean autorizados por la Academia de San Fernando. Las causas de la intervención regia se encontraba en *la necesidad de poner término a los lastimosos exemplares de incendios repetidos en los sagrados templos, por lo frágil y combustible de las materias de que se componen los retablos, por lo quehan movido mi Real ánimo a excitar el celo de los prelados y Cabildos para que en adelante cuiden de no permitir se haga en los templos de su distrito y jurisdicción obra alguna de consecuencia, sin tener dada seguridad del acierto; el cual jamás podrá verificarse si no se toman precauciones para evitar se edifique contra reglas y pericia del arte*. De ahí que los arzobispos y prelados deberían de consultar a la Academia *siempre que éstos, ya sea a propias expensas, o ya empleando caudales con que la piedad de los fieles contribuya, dispongan hacer obras de alguna entidad*. Se establecía un modelo administrativo que posteriormente sería desarrollado en el ordenamiento liberal como fue que *los directores o*



*artífices que se encargen de ellas, entreguen anticipadamente los diseños a aquellos Superiores con la correspondiente explicación, y que los agentes o apoderados respectivos presenten en Madrid a la Academia los dibujos de los planes alzados y cortes de las fábricas, capillas o altares que se ideen, poniéndolos en manos del Secretario, para que examinados con atención y brevedad y sin el menor dispendio de los interesados, advierta la propia Academia el mérito o errores que contengan, e indique el medio que conceptue más adaptable al logro de los proyectos que se formen, con proporción al gasto que quieran y puedan hacer las personas que los costearan.* Al mismo tiempo, el Conde de Floridablanca expresaba los deseos del Monarca, de no emplear más madera en los retablos y altares, mediante la cual no se evitaría el riesgo de incendio, sino también se pondría fin al gasto de los dorados expuestos a ennegrecerse y afearse en breve tiempo, por lo que en su lugar se podría emplear mármoles u otras piedras adecuadas *puesto que apenas hay ciudad en el reino, en cuyas cercanías no abundaba*<sup>1820</sup>.

Bedat analizó ampliamente la respuesta que los obispos tendrían del Decreto de 1777, siendo la mayoría receptivo a las normas decretadas por el Monarca. Ana Jesús Mateos Gil analiza un caso excepcional en la ejecución de la medida, concretamente en la fachada y torre de la parroquia de Santiago de Calahorra. Aunque la medida fue de carácter patrimonial, en el fondo subyace una intención claramente política, basada en el fundamento ideológico de exaltación del soberano. La cuestión principal de estos Decretos estriba en que fue una norma típica de una política regia de carácter patrimonialista, por lo que el Monarca participa en el ámbito artístico, monopolizando su propia producción, tratando con ello de planificar un verdadero monopolio estético que uniformara el gusto por el neoclásico, estilo regio predominante en la cortes del momento, con el fin de exaltar su soberana figura. Se instrumentalizaba la política cultural a sus intereses partidista<sup>1821</sup>. Estas Reales Cédulas van a ser administrada desde su mismo origen por Antonio Pons, Secretario General de la Real Academia desde 1776, y que contaba con una experiencia especialmente importante, puesto que Campomanes le había encomendado la protección del patrimonio confiscados por la Corona a la Compañía de Jesús. Es de suponer que estas Ordenes no fueran cumplidas con excesivo rigor debido a la reafirmación de las mismas a través de varias disposiciones posteriores y la queja de la Academia solicitando la supervisión de los proyectos, pero no cabe duda que se trataba no obstante, de una importante injerencia en el tradicional derecho de la propiedad de la Iglesia que hasta el momento había realizado cualquier tipo de trabajos en sus bienes con independencia y sin ningún tipo de control o supervisión. Además, el mismo

---

<sup>1820</sup> BÉDAT, Claude *La Real Academia de San Fernando (1744-1808): contribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989; .MARTIN GONZALEZ, J.J. *Comentarios sobre la aplicación de las Reales Ordenes de 1777 en l referente a lo mobiliario de los templos*.

<sup>1821</sup> La centralización del control otorgado en 1777 a la Academia era una solución ideal: en efecto, de Madrid, los académicos podrían imponer un estilo arquitectónico corrigiendo los proyectos que se le enviaran y borrando los excesos del arte barroco.

examen que ejercerá la Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre las construcciones va a suponer la aparición de la conciencia sobre el valor histórico y artístico de ciertos bienes, valor que comienza a considerarse de interés para la posteridad.

Una amplia normativa posterior a los Decretos de 1777 completaría tales disposiciones. Así, con la promulgación del **decreto de 8 de marzo de 1786**, se avisaba a los justicias municipales de que había que consultar a la Academia antes de emprender una obra pública. La orden sería reafirmada por la **del 30 de agosto de 1789**, que repetía la obligación de *quese prevenga a los corregidores, justicias, que siempre que haya que ejecutarse alguna obra pública se consulte a la Real Academia de San Fernando*. Unos meses después, una orden del **17 de octubre de 1789** reiteraba explícitamente la ley del 25 de noviembre de 1777: ninguna reparación en edificios públicos, especialmente los templos religiosos podían realizarse sin informe previo de la Academia<sup>1822</sup>. En **diciembre de 1798**, el Rey renovaría la orden expedida en 1777 para facilitar el examen y censura de los planos de los edificios proyectados; se debía prevenir a todos los magistrados y ayuntamientos del Reino que consultaran a la Academia de San Fernando siempre que se proyectase una obra pública. La medida se ampliaría al campo de las obras plásticas, por lo que en fecha del 29 de enero de 1809, se tenía en adelante que aprobar por la Academia de San Fernando no solo los planos de las obras públicas de arquitectura para su aprobación sino también los *diseños o modelos de las pinturas o estatuas que se traten de construir o colocar de nuevo en los templos, plazas y demás parajes públicos a expensas de los caudales de propios o de comunidades eclesiásticas, seculares y seglares, o de cualesquiera otros cuerpos*. En 1786 se va a crear la Comisión de Arquitectura en el seno de la Academia de Bellas Artes, dándole una identidad propia, que lo diferencia de las demás artes, por lo que se le estaba dando un reconocimiento de prevalencia que va a tener en el futuro su reflejo en el ámbito de la protección jurídica, al darle más impronta a los bienes inmuebles que los muebles. Sin embargo, cabe precisar un hecho: la Comisión de Arquitectura de la Academia solamente podía controlar las obras financiadas por el Estado – quedando fuera las encargadas por la Iglesia como las ejecutadas por los particulares- en Francia con una administración fuertemente centralizada una comisión administrativa asume por encargo del Ministerio del Interior la tutela del conjunto de los temas relacionados con la construcción, y particularmente la intervención en los cascos antiguos., (Gil Albarracín). La Academia publicaría ya en 1800 una circular a los arquitectos y maestros de obras, donde se exponía el fracaso de la Comisión, al haber sido

<sup>1822</sup> BEDAT, 1974, pp.325-332.

incapaz de establecer un control efectivo sobre las numerosas obras públicas que entonces se estaba proyectando en España<sup>1823</sup>.

### **3. La ambigüedad de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico en el ámbito del dominio privado.**

La proliferación de las excavaciones de antigüedades por parte de anticuarios, eruditos aficionados al coleccionismo de bienes arqueológicos, y la iniciativa real, al considerar dichos bienes como identificadores de las raíces históricas del nuevo estado ilustrado, va a abrir un debate jurídico sobre la cuestión tutelar de los bienes descubiertos, que podemos calificar de ambiguo, al no aclarar algunas cuestiones primordiales en torno al carácter dominal de los mismos, por lo que se va distinguir una doble tutela entre aquellos bienes arqueológicos que pertenecen al Dominio Privado y aquellos descubiertos por iniciativa pública, a instancia de la Monarquía, bajo la de la Real Academia de la Historia, dicotomía que será heredada por la legislación liberal, al no quedar resuelta en la Real Cédula de 1803.

#### **3.1. Las antigüedades en el ámbito del coleccionismo de los anticuarios y comerciantes y la iniciativa regia en la segunda mitad del siglo XVIII: Intereses políticos y científicos en el camino de la profesionalización de las excavaciones arqueológicas.**

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se asiste a una verdadera eclosión de la arqueología tanto por parte de las instancias oficiales como de un amplio número de eruditos, los anticuarios, que van a ir perfilando una cierta profesionalización científica a su práctica<sup>1824</sup>.

##### **3.1.1. La iniciativa regia en la tutela de las antigüedades. Los viajes literarios.**

---

<sup>1823</sup> GARCIA MELERO, José Enrique “Arquitectura y burocracia: el proceso del proyecto de la Comisión de Arquitectura de la Academia (1786-1800)” *Espacio, Tiempo y Forma*, T.IV, 1991, p.283. *El proyecto arquitectónico siguió entre 1786 y 1808 en la Comisión de Arquitectura de la Academia un complejo proceso burocrático desde su llegada a este organismo hasta su devolución para ser corregido o realizado por los arquitectos correspondientes o caer en el mayor de los olvidos al haber sido rechazado íntegramente. En este lento, fatigoso y a veces, hasta largo viaje de ida y vuelta fue objeto de un conjunto de minuciosas manipulaciones administrativas tanto por parte del secretario general de esta entidad como de dicha junta (...) Además, por lo general, el proyecto antes de recibirse en la Academia había sufrido ya otro proceso burocrático previo bien en los despachos de Palacio, en los del Consejo de Castilla o en el de Indias, o en los ayuntamientos, obispados y cabildos catedralicios correspondientes.*

<sup>1824</sup> Sobre la arqueología española en el siglo XVIII, MORA RODRIGUEZ, Gloria. *Historias del mármol. La arqueología clásica en el siglo XVIII. La arqueología clásica en el siglo XVIII*, Editorial Madrid Polifermo, 1998; “La arqueología en España durante el Renacimiento y la Ilustración”, *Zona Arqueológica*, Nº.3, 2004, pp.17-20.

Al mismo tiempo que se va desarrollando una práctica arqueológica en el ámbito de los eruditos, se va a ir produciendo una institucionalización pública de las excavaciones arqueológicas a instancia de la propia Monarquía. La búsqueda de las antigüedades como justificación ideológica de las raíces de la nación borbónica se convierte en un verdadero pilar en la política cultural del reformismo ilustrado, podemos afirmar que se inicia una verdadera institucionalización de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico, en manos de la Real Academia de la Historia, concretamente su Gabinete de Antigüedades, convirtiéndose en el inspector oficial de las antigüedades del Reino<sup>1825</sup>. La búsqueda de una historia nacional oficializada va convertirse de hecho en un proyecto primordial de los distintos gobiernos ilustrados, materializados en el coleccionismo público de antigüedades, que dará lugar una verdadera renovación de la conciencia histórica a instancias de los propios ilustrados, que irán marcando un verdadero camino hasta una verdadera cientificidad del bien a tutelar. De esta manera en el propio ámbito de la historiografía, con la aparición de los novatores, se intentará superar las historias basadas en las genealogías fabulosas y narraciones indocumentadas y fantásticas de la literatura de los siglos XVI y XVII, especialmente los llamados falsos cronicones, lo que reavivará el interés por el pasado, estimulando desde las propias instancias regias la necesidad de escribir una nueva historia de la nación, acorde con los planteamientos de exaltación de la identidad nación-Monarquía de la etapa ilustrada de los Borbones<sup>1826</sup>, como aparecerá reflejado en los propios textos de Jovellanos: *La nación carece de historia. En nuestras crónicas, anales, historias, compendios y memorias apenas se encuentra cosa que contribuye a dar una idea cabal de los tiempos que describen (...) Pero, ¿Dónde hay una historia civil, que explique el origen, progresos y alteraciones de nuestra Constitución? (...)*<sup>1827</sup>.

Al mismo tiempo se puede afirmar que en la segunda mitad del siglo XVIII nacería una historiografía artística de carácter ilustrado de la mano de algunos eruditos, sensibilizados ante la falta de la confección de una historia del arte española, como había ocurrido ya en el ámbito italiano<sup>1828</sup>. Desde el

<sup>1825</sup> MORA RODRIGUEZ, Gloria “Arqueología y poder en la España del siglo XVIII”, en OLMOS ROMERA, Ricardo; ARCE MARTÍNEZ, Javier (Coord.) *Historiografía de la arqueología y de la historia antigua de España (siglos XVIII-XX)*, Congreso Internacional, Madrid, 13-16 de diciembre de 1988.

<sup>1826</sup> SALAS ALVAREZ, Jesús “La arqueología en Andalucía durante la Ilustración (1736-1808)”, Anejos de la *Revista Mainake*, Secretario de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Servicio de Publicaciones Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Sevilla, 2010, pp.22-23.

<sup>1827</sup> JOVELLANOS, Gaspar Melchor, *Discurso sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra historia y antigüedades*, Madrid, 1755, 1969, p.100.

<sup>1828</sup> El coleccionismo de la Ilustración es el primero que busca la dimensión científica de los objetos apoyándose en los instrumentos de Derecho Público OLIVER IMPEI y ARTHUR MAS GREGOR (eds.) *The origins of Museums. The Cabinet of Curiosities of sixteenth and seventeenth-century Europe*, Clarendon Press. Oxford, 1985.

principio como precisa Juan Calatrava se planteará como un discurso racional y rigurosamente crítico, alternativo a las *anteriores descripciones de carácter encomiástico o a las teorizaciones artísticas barrocas. Frente al carácter hagiográfico de las inmediatamente anteriores descripciones artísticas o arquitectónicas o historias de ciudades, se esgrimirá ahora como nuevo criterio histórico-crítico el de la búsqueda de la veracidad en nombre de la razón. Frente a la aceptación indiscriminada de todo tipo de leyendas y tradiciones, se planteará la exigencia de un riguroso trabajo de archivo y la necesidad de rechazar todo dato no contrastado documentalmente. Sin embargo, esta búsqueda ética de la veracidad no presupone, en modo alguno, una idea de objetividad científica ni de neutralidad de historiador (...) no se tratará de un discurso historiográfico puro en sentido académico, sino de una historiografía destinada a fundamentar sobre bases teóricas e históricas las reformas artísticas y arquitectónicas que por entonces estaban siendo patrocinados desde los círculos de poder borbónico (...)*<sup>1829</sup>. Estos primeros historiadores del arte ilustrados establecerían un primer modelo de periodización de la historia del arte español, aunque sería trazado como una valorización estética que con un rigor científico<sup>1830</sup>. Los protagonistas de esta nueva historia del arte, fueron principalmente eruditos, surgiendo los primeros proyectos para su elaboración entre la década de los setenta y ochenta del siglo<sup>1831</sup>. Probablemente sea el caso de Bosarte el primero que abra esta nómina de historiadores del arte españoles, que en 1786 daría la luz su primera publicación, la *Disertación sobre los monumentos antiguos pertenecientes a las nobles artes de la pintura, escultura, y arquitectura, que se hallan en la ciudad de Barcelona*, a lo que daría paso la publicación de la revista *gabinete de lectura español*, donde ya expone que se debía de formar la historia de la arquitectura de la nación, al considerar que si alguna *Nación puede presentar edificios y ruinas de todos los tiempos... es España*, el erudito vasco Eugenio Llaguno (1724-1799), quien comenzó a recopilar todos los monumentos arquitectónicos que consideraba importante en suelo hispano, aunque a su muerte, su trabajo todavía permanecía inédito, siendo completado por Juan Agustín Ceán Bermúdez (1749-1829), quien publicaría en cuatro tomos una de las obras primordiales de la nueva ciencia historiográfica, *Noticia de los arquitectos y arquitectura de España* (1829), a la que se había unido a su anterior *Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes de España*, publicada en 1800. Se considera por la crítica que el famoso *Viage de España*, escritas entre 1772 y 1794, realizado por Antonio Ponz se convierte en una de la síntesis mejor elaborada de la crítica artística del momento. Finalmente, cabría destacar a Jovellanos, que en 1789, tenía elaborada una primera redacción de las epístolas conocidas como *Cartas a D. Antonio Ponz o Cartas del Viaje de Asturias*,

---

<sup>1829</sup> CALATRAVA, Juan *Estudios sobre historiografía de la arquitectura*. Granada, 2005. pp.61-62.

<sup>1830</sup> HENARES CUELLAR, I. *La teoría de las artes plásticas en España en la segunda mitad del siglo XVIII*. Granada, 1977.

<sup>1831</sup> MORAN TURINA, M. “De Palomino a Ceán, los orígenes de la historia del arte español”, en BERMUDEZ, Ceán, *Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España*, Madrid, 2001, pp.5-17.



donde muestra un amplio interés por la impronta del arte, especialmente en su Descripción de la Catedral de Palma<sup>1832</sup>. La apertura de esta nueva historiografía artística abre el camino a una nueva manera de contemplar la obra del arte. La valoración del objeto a conservar no solamente tendrá un fundamento simplemente estético, sino que se aprecia una clara visión ideológica. En el texto del arqueólogo español Fray José de Ortiz y Sanz, traductor de Vitrubio por encargo de Carlos III y autor del Viaje Arquitectónico Anticuário de España, se encierra una declaración de principios sobre la preocupación ilustrada sobre el patrimonio histórico: *Los edificios antiguos, de cualquier clase que sean, ocupan en la historia de las naciones un lugar muy distinguido y recomendable entre los lugares históricos; y además de esto, bien examinados y entendidos, son los mejores maestros para restaurar la buena Arquitectura, y saber su verdadera historia*. Los antiguos monumentos se le dan un valor cultural e ideológico como se puede apreciar en el siguiente texto: *No hay edificio alguno de la antigüedad (sin exceptuar los Arabescos) de quien no podamos aprovecharnos ventajosamente en infinitas ocasiones. Quanto mas ultrajados de los años y persecuciones, tanto más venerables y dignos de estima. Grabadas están en ellos la opulencia, la religión, las costumbres, los ritos, el poder, el gusto de los autores, y la pericia de sus Arquitectos (...) Istria, Palmira, Persépolis, Balberk, Atenas, Corinto, Melaso, toda Grecia serán la admiración de los observadores instruidos, mientras de su antiguo esplendor quedan ruinas y vestigios*<sup>1833</sup>. En la misma línea se encuentran los comentarios del Marqués de Valdeflores, en su libro *Memorias del viage de España* (1765): *Los escritores y monumentos originales de cada siglo... son los únicos depósitos de la verdadera historia... Apenas hay nación culta que no haya procurado recoger y coordinar los escritores y monumentos originales de sus cosas*.

### 3.1.2. Las antigüedades en el ámbito del coleccionismo de los anticuarios y comerciantes en la segunda mitad del siglo XVIII.

En 1870, el erudito Florencio Janer ya apuntaba en un artículo publicado en la Revista de España con el título *Aprecio en que se tenían los objetos científicos y arqueológicos en el reinado de Carlos III y Carlos IV*, el amplio desarrollo que vivió la arqueología erudita en nuestro país<sup>1834</sup>. Y es que la existencia de un coleccionismo privado de antigüedades es un hecho en el ámbito social de la España de la segunda mitad del siglo XVIII. Como apunta María Dolores Antigüedad el *tráfico o comercio de cuadros siguió siendo hasta fin de siglo un negocio saneado que atraía por igual a extranjeros y nacionales. Las colecciones de la nobleza fueron en buena medida objeto de*

<sup>1832</sup> GONZALEZ SANTOS, J. *Jovellanos (1744-1811), aficionado y coleccionista*, Gijón, 1994.

<sup>1833</sup> ORTIZ Y SANZ, J. *Viaje arquitectónico-anticuario de España*. Madrid, 1787. Sobre la literatura de viaje en el siglo XVIII, PIMENTEL, J. *Testigos del mundo. Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración*. Madrid, 2003.

<sup>1834</sup> JANER, Florencio *Aprecio en que se tenían los objetos científicos y arqueológicos en el reinado de Carlos III y Carlos IV*, *Revista de España*, 1870, XVII-XVIII, pp.220-227. Boletín bibliográfico Tomo XXI.



*deseo para marchantes o curiosos. Sus propietarios raras veces se ocuparon de engrandecerlas, por el contrario fueron muchos los que trataron de sacarlas a buen precio*<sup>1835</sup>. Curiosamente Céan Bermúdez en su Diccionario histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España obvió la mención de las obras de arte en manos de los particulares, como apunta su amigo Vargas cuando expresa que las colecciones privadas *son las más expuestas a parecer y mudar de amo, eran las que pedían con más justicia ser conocidas y anunciadas, tanto para galardón de sus poseedores y estimuladores a su conservación, como para guía, alarma y gobierno de los aficionados que estuviesen a la mira, a los vaivenes y trastornos de las casas* (...). El profesor Beltrán realizó un interesante esbozo del coleccionismo de antigüedades en Andalucía desde el siglo XVI al XVIII, donde nos muestra los distintos perfiles sociológicos que van a existir que les van a llevar a responder a intereses diversos a la hora de acometer esta actividad. Tendríamos aquellos personajes de ascendencia noble, que solamente van a moverse por una justificación de su linaje, e incluso incorporan un símbolo de prestigio, que marcaría las colecciones que han ido surgiendo desde el siglo XVI en el ámbito cortesano andaluz, como sería el caso del marquesado de Estepa, cuya afición de las antigüedades iría más allá del mero gusto estético y arqueológico. Ya con la Ilustración, ya irían surgiendo un grupo de anticuario, que guiados por un afán erudito van a ir reuniendo sendas colecciones de todo tipo de piezas, como fue el caso de Pedro Leonardo de Villacevallos, un hidalgo cordobés que gracias a su desempeño político como concejal y su capacidad económica lograría reunir en su casa una amplia colección. Un caso paradigmático será el gabinete de las antigüedades del Marqués de Cañada del Puerto de Santa María en la segunda mitad del siglo XVIII. La localidad gaditana se había convertido durante este momento después de Sevilla y Cádiz la ciudad andaluza más importante del Reino de Sevilla a mediados del siglo, en cuanto a las rentas generadas por la actividad industrial y comercial, según las respuestas generales del Catastro de Ensenada (1760), generando una oligarquía comercial de primera impronta, cuya fortuna le permitirían desarrollar una producción artística de bienes inmuebles (suntuosos palacios, capillas familiares) y muebles (entre los que se encontraban joyas, mobiliarios, pinturas, etc) que llegaron a alcanzar en torno al siete por ciento de ellas y que nos revelan las tendencias artísticas que discurrían en el entorno de estas familias. Uno de estos, el Marqués de la Cañada, Guillermo Tyrry (1726-1779), heredaría y ampliaría el gabinete de antigüedades de su padre, uno de los muchos que surgieron en Andalucía en base al fervor arqueológico del coleccionismo

---

<sup>1835</sup> ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO, María Dolores, Del saqueo del patrimonio al patrimonio nacional” en María Dolores en RAMOS SANTANA, Alberto; ROMERO FERRER, Alberto, *Liberty, Liberté, Libertad: el mundo hispano en la era de las revoluciones* (eds.), Cádiz, Universidad de Cádiz, 2010, p.437. La propia María Dolores Antigüedad señala el estudio de Isadora Rosa de Viejo, con el título Manuel Godoy, patrón de las Artes y coleccionista, donde se incluye un inventario de las colecciones españolas todavía existentes en España en el siglo XVIII.

erudito del siglo XVIII, potenciando a raíz de las excavaciones arqueológicas borbónicas de Pompeya, Herculano y Estabia. Consta que en su colección personal de obras de arte, junto al gabinete arqueológico (entre lo que se encontraban piezas variopintas como obras clásicas, piezas egipcias y otras representativas del mundo precolombino, como vasos e idolillos peruanos, procedente del intenso tráfico comercial de la localidad gaditana), llegó a reunir una colección numismática de 2.500 piezas y una biblioteca con unos 7.000 volúmenes<sup>1836</sup>. En torno a este coleccionismo privado de piezas pertenecientes a la antigüedad clásica se estaba delimitando unos intereses peculiares, donde el dueño del bien va a ostentar el derecho de gozo y disposición sin ningún tipo de límite, que va ir cuajando y que se proyectará posteriormente en los momentos primordiales de la España Liberal. No existe aparentemente un conflicto de intereses entre la Administración y el coleccionismo privado en estos casos.

### **3.2. La génesis de la política institucional de protección del Patrimonio Arqueológico. Monumental en el reinado de Felipe V y Fernando VI.**

Durante los reinados de Felipe V Y Fernando VI se van a incorporar las primeras políticas institucionales de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico, en forma de instrucciones regias como la *del marqués de la Ensenada dirigida a Francisco Barrero Peláez, Intendente de Marina del Departamento de Cartagena (R.O. del 8 de abril de 1752)* y la *Instrucción que ha de observar D. Luís José Velázquez, Marqués de Valdeflores, de la Real Academia de la Historia en el viage a que está destinado para aberiguar y reconocer las antigüedades de España, siendo aprobada por Real Orden de 2 de noviembre de 1752.*

#### **3.2.1. Una incipiente tutela administrativa a instancia de la Monarquía: Las Reales Academias.**

Una de las cuestiones que podemos poner en cuestión a la hora de concebir una verdadera tutela pública del Patrimonio Histórico-Artístico en la España de los Borbones es la delimitación de una verdadera administración que se encargase específicamente de su conservación y protección. No cabe duda que estas instituciones administrativas específico tendrían que estar insertadas a su vez en la articulación de un sistema administrativo general. Sin entrar en un estudio exhaustivo del mismo, se puede hoy afirmar que en los Estados Monárquicos de la segunda mitad del siglo XVIII había aparecido un aparato institucional que va a ir asumiendo el control político y social de todos los ámbitos de la sociedad. En palabras de Giannini *en el siglo XVIII el Estado, con su aparato, en la Europa continental, da un salto hacia delante cualitativo de cuya*

<sup>1836</sup> BUHIGAS CABRERA, José Ignacio; PEREZ FERNANDEZ, Enrique, “El marqués de la Cañada y su Gabinete de Antigüedades del siglo XVIII en el Puerto de Santa María” en BELTRAN, Jose; GASCO, Fernando *La Antigüedad como argumento, historiografía e arqueología e Historia Antigua en Andalucía*, Sevilla, 1993, pp.205-211.

*importancia, en realidad no se ha insistido suficientemente*<sup>1837</sup>. El ideal de este nuevo Estado de fuerte centralismo administrativo, tendrá un fundamento dogmático: el interés nacional, que tendrá como consecuencia la asunción por parte del Estado de un conjunto de nuevas atribuciones (asume en este periodo actividades empresariales en los sectores más variados como la agricultura o la industria; la asistencia a los sectores más desfavorecidos; la construcción de obras públicas, etc.). Será en este contexto cuando el Estado se inserte verdaderamente en el ámbito de las artes y de la cultura, promoviendo instituciones que ayuden a su desarrollo. Alejandro Nieto pone en cuestión una verdadera configuración del sistema administrativo español durante el siglo XVIII, por la existencia de una variedad de regímenes tradicionales, sin que la monarquía pudiera conseguir una uniformidad y centralización y la fragmentación del poder soberano del Estado en núcleos personales autónomos. Como novedad trascendental Nieto apunta la aparición de un factor teórico, la Policía, *que va a pretender explicar el nuevo papel que se arroga el Estado absoluto y que potencia –y, en todo caso, presta cobertura jurídica- a su operatividad*<sup>1838</sup>. En este contexto va a nacer lo que podríamos denominar como la génesis de la institucionalización pública administrativa de tutela regia en el ámbito de la España Borbónica, que van a presentar los mismos problemas organizativos que se habían planteados en el ámbito de la Administración general española, por lo que podríamos destacar algunos caracteres que podemos observar en la definición de una verdadera administración tutelar del Patrimonio Histórico-Artístico, en este caso de las antigüedades.

**LA INSTITUCIONALIZACION ADMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO EN LA ESPAÑA DE LOS BORBONES.**

**REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA**



**GABINETE DE ANTIGÜEDADES**

A raíz del Real Decreto de 18 de abril de 1738, al que le seguiría el Real Decreto de 17 de junio en el que se sancionaba el Estatuto va a nacer la Real Academia de la Historia, bajo el mandato de Felipe V, cerrándose el modelo de tertulia privada de notables que había sido el arranque de su origen, por lo que se convertía en una institución amparada por el poder público<sup>1839</sup>. El

---

<sup>1837</sup> GIANNINI, Massimo Severo, *El poder público Estados y Administraciones Públicas*. Editorial Civitas, Madrid, 1986, pp.44-46.

<sup>1838</sup> NIETO, Alejandro, *Estudios históricos sobre Administración y derecho administrativo*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1986, p.71.

<sup>1839</sup> Sobre su origen y el desarrollo institucional de su primera etapa, La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII. Una institución de sociabilidad, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2000, pp.34 y ss; AGUILAR PIÑAL, Francisco, “Las Academias”, en *Historia de España Ramón Menéndez Pidal. La época de los Primeros Borbones. La cultura española entre el Barroco y la Ilustración (1680-1759)*,

6 de enero de 1792 el Duque de Almodóvar, sería elegido Director de la Academia de la Historia, impulsando la institución mediante la reforma de sus estatutos, decidiendo que la Junta Ordinaria se dividiera en Cuatro Salas, la del Diccionario Geográfico, la de la Historia de las Indias, y la de las Antigüedades y Diplomática. En el mismo día que Godoy es nombrado Secretario de Estado, el 15 de noviembre de 1792, el rey Carlos IV aprueba los nuevos estatutos de la Real Academia de la Historia, y el 15 de noviembre de este año serían confirmados por Real Cédula de Carlos IV, naciendo así la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Como apunta Maier, la creación de una Sala que se ocupase específicamente de las Antigüedades no solo respondería a las atribuciones propias del instituto de la Academia, sino también al creciente interés de los gobiernos ilustrados europeos por la conservación, protección y estudio de los monumentos antiguos de sus respectivos países, por lo que *se inicia el camino de la modernidad, una medida que refleja la creciente importancia y sensibilización hacia las antigüedades*, que se mantuvo en funcionamiento hasta la etapa de Isabel II<sup>1840</sup>. Y es que hasta la invasión francesa, la Real Academia de la Historia tendría un papel indiscutible sobre la inspección de antigüedades, que junto a su Gabinete de Antigüedades y la red de académicos correspondientes dispersos por la Península desarrollaron una importante labor de protección, aunque siempre con las limitaciones propias del siglo. El Gabinete de Antigüedades se inicia a mediados del siglo XVIII dentro de un movimiento de coleccionismo de inspiración borbónica claramente secundado por las elites anticuarias ilustradas, en su mayoría sacerdotes de origen andaluz. A fines del siglo XVIII ya contaban con una colección de antigüedades consolidada, en la que destacaban las monedas. Los Anticuarios formaban parte del gobierno de la Academia, participan en la Comisión de Antigüedades y, a través de ésta<sup>1841</sup>. Entre los primeros proyectos que haría el nuevo organismo sería la elaboración de la Colección Litológica o de las Inscripciones de España, siendo encargados a los anticuarios José de Guevara y a Cándido María Trigueros. El reconocimiento definitivo vendría a raíz de la promulgación de la Cédula de 1803, cuando se le confiere en el Preámbulo de la norma, el reconocimiento y la denominación de los *monumentos antiguos*, así como la inspección general de las antigüedades que se descubran en todo el reino. La Real Academia dependía directamente de la Secretaría de Estado para cualquier cuestión oficial tal y como figura en la Novísima Recopilación.

---

T.XXIX/2, pp.151-193, Madrid, 1985. NAVA RODRIGUEZ, María Teresa “La Real Academia de la Historia como modelo de unión formal entre el Estado y la cultura (1735-1792)” *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, 8, pp.127-155.

<sup>1840</sup> ALMAGRO=GORBEA, *El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia: pasado, presente y futuro*. Madrid, 1999.

<sup>1841</sup> Nava Rodríguez, María Teresa “La Real Academia como modelo de unión formal entre el Estado y la cultura (1735-1792)”, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, nº8, 1987, pp.127-156; “Legado arqueológico, academicismo e historia en el setecientos español”, *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie VII, Historia del Arte, nº 2, 1989, pp.197-208.

### 3.2.2. La Instrucción del marqués de la Ensenada dirigida a Francisco Barrero Peláez, Intendente de Marina del Departamento de Cartagena (R.O. del 8 de abril de 1752).

Durante el gobierno de Fernando VI y con del Marqués de la Ensenada se comienza a perfilar una dualidad en el régimen jurídico de la tutela pública entre los intereses privados de los particulares y el interés general, como podemos observar en la primera actuación legislativa sobre conservación del Patrimonio Arqueológico como fue la **Instrucción del marqués de la Ensenada dirigida a Francisco Barrero Peláez, Intendente de Marina del Departamento de Cartagena (R.O. del 8 de abril de 1752)**, referente a la conservación y protección de las antigüedades halladas al hacer obras en el puerto y que debían enviarse a la Academia de la Historia. La Instrucción acabaría remitiéndose a los intendentes de marina de todos los puertos de España<sup>1842</sup>. Un año después, se promulgaba el **Real Decreto de 14 de julio de 1753** *mandado a los Corregidores y Justicias del Reino remitan a Madrid y a la Casa establecida de geografía todas las piezas de antigüedad que se hallaren, con expresión del sitio en que se encuentren, como son estatuas de mármol, bronce u otro metal, rotas o enteras, Pavimentos Mosaicos, o de otra especie, herramientas, o instrumentos de madera, piedra o suela, monedas o lápidas y lo que de ellas se diga por escritos, tradiciones, o noticias, que las dichas Justicias deben comunicar a los Intendentes, estos pagar el coste del descubrimiento de cuenta de la Real Hacienda, y dar los Intendentes, estos pagar el coste del descubrimiento de cuenta de la Real Hacienda, y dar aviso con su remisión a S.M. por la vía reservada, o por el Ministro que corre en la dirección de la Casa de Geografía, y según se les tiene prevenido, para que el citado Decreto tenga efecto.* La tutela pública del Patrimonio Arqueológico, fundamentado en el interés que fue naciendo en el seno del Estado Monárquico por la recogida de antigüedades clásicas, va a ser obstaculizada por la existencia del derecho de la propiedad privada ya en la etapa del reinado de Fernando VI. Un caso paradigmático podríamos encontrarlo en las excavaciones de la villa de Cartama, en la provincia de Málaga, habiendo el Rey comisionado al ingeniero Carlos Luján para que informase sobre los descubrimientos efectuados en este momento. Sin duda alguna estamos ante una de las prácticas que va a ir siendo común en la etapa borbónica: la inspección pública de las excavaciones arqueológicas que aunque poca se estaban haciendo en este momento. En el Informe constaba que el vecindario había recogido un gran número de piezas *arqueológicas de la que intenta el vecindario hacer humilladero pues no lo tienen*, al mismo tiempo que se intervendría en la suspensión de la excavación por tres motivos, *el primero porque el señor Juez de cruzada ymio comisión para que se cesase y se embargase lo sacado*,

---

<sup>1842</sup> BETEHENCOURT MASSIEU, A. de “El marqués de la Ensenada y la arqueología, hallazgos romanos en las obras de cimentación del arsenal de Cartagena (1750-1752)”, *Boletín de Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, XXIX, 1963, pp.73-87.



*lo segundo porque no había quien costease y lo tercero porque para proseguir era ya necesario ya tocar a las casas*<sup>1843</sup>.

**3.2.3. La Instrucción que ha de observar D. Luís José Velázquez, Marqués de Valdeflores, de la Real Academia de la Historia en el viage a que está destinado para aberiguar y reconozar las antigüedades de España, siendo aprobada por Real Orden de 2 de noviembre de 1752.**

Fernando VI nombra una comisión científica para el estudio y recuperación de la documentación, y en general del legado histórico de la nación, para lo que autorizaría a la Academia para que enviase a algunos de sus miembros de más prestigio para que investigase y reconociese las antigüedades de toda España. Con este objetivo, bajo la protección de Fernando VI y el Marqués de la Ensenada se va a proyectar los llamados para los que se celebraron un amplio número de Viajes Oficiales, que participaron un gran número de eruditos, que dio paso a un gran número de descubrimientos arqueológicos en un gran número de pueblos de las geografía hispana, dando lugar a la confección de verdaderos inventarios y siendo un precedente de los llamados viajes románticos. Estos viajes de iniciativa real fueron analizados por Gómez de la Serna, que los califica en verdaderas empresas políticas y científicas al servicio de la Corona<sup>1844</sup>, que hunden sus raíces en el reinado de Felipe II en las llamadas Relaciones Topográficas o Relaciones de los Pueblos de España, que aunque en principio se podría percibir un interés arqueológico por las antigüedades españolas su intención tendría unos tintes plenamente económicos y políticos, como fue conocer con exactitud cuáles eran los recursos y el estado exacto de la monarquía en un momento de gravísimos trastornos económicos. De esta manera a partir de 1575 centenares de ciudades y pueblos españoles recibieron la visita oficial de dos comisarios reales que entre diversas cuestiones se formulaban preguntas sobre *los edificios señalados que en el pueblo hubiese, y los rastros de edificios antiguos, epitafios y letreros, y antiguallas de que hubiere noticia*. Sin embargo, los resultados en la mayoría de los casos fueron decepcionantes *en una sociedad cuya memoria histórica aún se identificaba mayoritariamente con la memoria de una generación (...) el concepto de antigüedad resulta enormemente difuso*<sup>1845</sup>.

Entre estos viajes caben destacar los de Luis José Velázquez de Velasco, marqués de Valdeflores (1722-1788)<sup>1846</sup>, que en el decreto de

<sup>1843</sup> “Comunicaciones dirigidas al Marqués de la Ensenada dándole cuenta de las antigüedades e inscripciones halladas en la villa de Cartama”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1876, Tomo IV, pp.210-214, 223-226.

<sup>1844</sup> GÓMEZ DE LA SERNA, G. *Los viajeros de la Ilustración* Madrid, 1974.

<sup>1845</sup> MORÁN TURINA, J. Miguel “Arqueología y coleccionismo de antigüedades en la corte de Felipe II”, en *Catálogo de la exposición Adán y Eva en Aranjuez. Investigaciones sobre la escultura en la Casa de Austria*, Museo del Prado, Abril/Mayo, 1992, pp.38-39.

<sup>1846</sup> Sobre el Marqués de Valdeflores, ALVAREZ MARTI-AGUILAR, M. *La antigüedad en la historiografía del siglo XVIII: El Marqués de Valdeflores*, Málaga, 1966; CANTO, A. “Un precursor hispano del CIL en el siglo XVIII: el Marqués de Valdeflores”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, CXCI, 1997, pp.499-516.



nombramiento del 2 de noviembre de 1752, establecía que recorriera todas las provincias de España, averiguando sus riquezas artísticas, con el objetivo general de elaborar una historia general del país hasta 1700, para que pudiera ser posteriormente utilizado por la política regionalista borbónica<sup>1847</sup>. En la Real Orden establecía como fin del viaje *examinar, recoger e ilustrar todos los antiguos monumentos de la Nación y hacer las observaciones necesarias para el conocimiento de la antigua Geografía del país*. Como apunta Jesús Salas Fernando VI vio en el proyecto la posibilidad de emular a su suegro, el monarca portugués Juan V, quien en 1721 había dictado un decreto para proteger los monumentos antiguos. Sería encargada a la propia Real Academia de la Historia que impulsaría este proyecto, por lo que Agustín de Montiano y Luyando, director de la docta institución, por lo que se propuso a José Velázquez de Velasco que redactase el proyecto, labor que realizaría el 16 de julio y 4 de agosto de 1752 mediante las Representaciones dirigidas a la propia Academia, siendo ratificada por el propio Marqués de la Ensenada<sup>1848</sup>, y sancionada por el Monarca, cuya denominación sería *la Instrucción que ha de observar D. Luís José Velázquez, Marqués de Valdeflores, de la Real Academia de la Historia en el viage a que está destinado para averiguar y reconocer las antigüedades de España, siendo aprobada por Real Orden de 2 de noviembre de 1752*<sup>1849</sup>, verdadero precedente de la posterior Cédula de 1803. El contenido de la Instrucción proyecta la potestad jurídica de la autoridad regia en el proyecto, por lo que establece que todas las autoridades políticas y civiles le presten su apoyo en el ejercicio de su cargo: *a todas las autoridades pertinentes, Se halla nombrado para ir á averiguar, y reconocer las Antigüedades de España, recorriendo á este fin las Provincias de la Península: manda el rey á los Capitanes y Comandantes Generales de ellas, a los Intendentes, Gobernadores, Corregidores, Justicias, y demás personas á quienes tóque, y se presentare este Despacho, faciliten al expresado D. Luis Velázquez todo el favor, auxilio y asistencia que pidiere (...), sin ningún tipo de limitación en todo lo que necesitáre para el desempeño de su Comisión sin ponerle ni permitir se le ponga el menor impedimento ni dilación*. La obligación primordial que se establecerá será *la que le hagan franquear y poner de manifiesto los Archivos, y Protocolos públicos, que indicáre, para sacar de ellos las noticias que le pareciere, y copias simples, ó autorizadas de los Documentos, y demás Papeles que tubiesen conexión directa o indirecta con sus encargos*, sin hacer ninguna alusión a los archivos privados. En el articulado de la Instrucción se especificará la primera selección del Patrimonio Monumental que podemos contemplar en el ámbito del derecho

---

<sup>1847</sup> ALVAREZ MARTI-AGUILAR, M. *La Antigüedad en la historiografía española del siglo XVIII: El Marqués de Valdeflores*. Málaga, 1996.

<sup>1848</sup> SALAS ÁLVAREZ, Jesús, *La Arqueología en Andalucía durante la Ilustración (1736-1808)*, Universidad de Sevilla, Diputación de Málaga, Anejos de la Revista Mainake, 2010, pp.36-37.

<sup>1849</sup> ALMAGRO-GORBEA, Martín “La Real Academia de la Historia, una institución al servicio de la arqueología española” *Zona Arqueológica*. Pioneros de la Arqueología en España. Del siglo XVI a 1912. Museo Arqueológico Regional, 3 Alcalá de Henares, 2004, p.57.

español, todos ellos pertenecientes a la Antigüedad Clásica, distinguiendo entre los bienes inmuebles, *las ruinas de los famosos pueblos de la antigüedad y las reliquias de sus más suntuosos edificios como los teatros, anfiteatros, circos, naumachias, acueductos, puentes, arcos de trofeo, templos, termas y sepulcros* (art.5), y los muebles que comprenderán *las estatuas antiguas, basas, relieves, camafeos, piedras grabadas, medallas y demás reliquias comprobadas de la antigüedad* (art.9), e incluso introduce algunas manifestaciones de otros periodos artísticos *así de letras desconocidas como latinas, góticas, árabes y hebreas*. La Instrucción va a plantear por primera vez en una normativa estatal la intervención de la Administración regia en el ámbito del derecho privado, donde ya se vislumbra una limitación en la actuación pública, como podemos apreciarlo en la lectura del artículo 7º al establecer entre una de sus obligaciones la de *hacer algunas ligeras excavaciones si fuere necesario para el desempeño de su Comisión, teniendo que ser interrumpida si estas devieren ser más largas, costosas o en perjuicio de alguno no las practicará sin representar antes a S.M. por medio del Director de la Academia para su Real permiso*. Nos encontramos ante una de las primeras limitaciones que se encontrará la Administración española en todo el proceso de configuración de un modelo público de la tutela patrimonial: la no instrucción en el ámbito privado si perjudicara en sus intereses. A esta medida se uniría la capacidad que el Monarca dará al viajero ilustrado para adquirir piezas arqueológicas para lo que *formará de todas ella una colección*, aunque con la imposición de dos límites: *comprándolas de las personas que voluntariamente se determinen a venderlas*, por lo que nuevamente subyace el respeto a la propiedad privada, y que la cuantía económica no se extendiera en demasía, *su coste no sea excesivo, pues pasando de una cantidad moderada, esperará la Real aprobación antes de ejecutar la compra*<sup>1850</sup>.

Con la caída del Marqués de la Ensenada, el proyecto quedaría en suspenso cuando ya había empezado a realizar sus primeros viajes y una amplia labor de recopilación (una primera etapa entre el 1 de diciembre de 1752 a 9 de noviembre de 1753, que lo llevaría a Extremadura; una segunda, del 10 de noviembre de 1752 a 31 de diciembre de 1754, por tierras andaluzas, especialmente Sevilla y la ciudad de Itálica; una tercera, etapa desde el 1 de enero de 1755 a 1765, a pesar de que por la Real Orden de 8 de febrero de 1755, les fuera retirados los fondos asignados, cayendo en desgracia política, aunque pudo seguir contando con el apoyo de la Real Academia de la Historia<sup>1851</sup>. Los resultados de sus investigaciones quedarían recogidos en la denominada Colección general de los antiguos documentos históricos de las cosas de España, que estarían compuesto por 67 volúmenes, que contenían 13.644 documentos, 439 escritores, 7.008 diplomas, 4.134 inscripciones, 2.021

<sup>1850</sup> El texto aparece reproducido en SALAS ALVAREZ, Jesús Imagen historiográfica de la antigua Urso (Osuna, Sevilla). Sevilla, 2002, pp.48-49. Como señala Jesús Salas una sola parte de su trabajo sería publicado, quedando la mayor parte de la documentación inédita en la Real Academia de la Historia.

<sup>1851</sup> SALAS, J., 2010, pp.43-50.

monedas, 62 monumentos de pintura, mosaicos, escultura y arquitectura. Los manuscritos recopilados quedarían como colección privada, siendo heredado por su hermano, Francisco Velázquez, por lo que a su muerte, serían reclamados por la Real Academia de la Historia a raíz de la preparación de un nuevo viaje que M. Abellá había propuesto a Godoy, y que había sido aprobado el 11 de agosto de 1795. Francisco Velázquez accedería a la petición de la Real Academia y enviaría cuatro cajones de manuscritos y documentos diversos, nombrándose a J. Traggia el encargado de revisar todas las colecciones de inscripciones, trabajo que consta documentalmente que se siguió prolongando entre 1801 y 1806<sup>1852</sup>.

### **3.3. La concepción pública del dominio arqueológico: El modelo administrativo de las excavaciones de Herculano y Pompeya y su proyección en la España Borbónica.**

Durante la etapa de Carlos III, el Patrimonio Arqueológico va a ir adquiriendo una considerable tutela a raíz de los hallazgos de las Antigüedades Clásicas, en un momento en que el mundo greco-romano se le estaba mostrando un fundamento político de las grandezas de la institución monárquica, a instancia de algunos ministros ilustrados como Pedro Rodríguez Campomanes<sup>1853</sup> y el Conde de Floridablanca. La cuestión primordial que se nos plantea en este momento es la referente a la tutela patrimonial, ya que las excavaciones en la mayoría de los casos no formaban parte de una planificación sistematizada a instancia de los poderes públicos, sino que los particulares, anticuarios y amantes del mundo de las Antigüedades, eran los que se dedicaban a rescatar los bienes del pasado clásico. Los problemas de la tutela patrimonial no sería tal si los bienes históricos-artísticos no se le comenzara a dotar de un valor jurídico, por lo que el Estado debía de intervenir en aras de su conservación, y es más, hasta qué punto el descubridor se consideraba propietario del bien descubierto. Este conflicto de intereses producidos entre las pretensiones del descubridor de adquirir el bien para su colección particular y el propio Estado va a ir subsumiendo una situación preliminar en esta etapa, que culminará como ya hemos apuntado en la consideración de dominio público de los bienes arqueológicos en el periodo actual. La autorización regia como símbolo del Estado para realizar excavaciones arqueológicas durante los años del Despotismo Ilustrado se convierte en un verdadero antecedente del procedimiento administrativo de legislaciones posteriores. En las excavaciones de Pompeya y Herculano podemos vislumbrar una realidad jurídica que se va repitiendo en este periodo: la apertura hacia una concepción pública del dominio de un espacio

---

<sup>1852</sup> CANTO, Alicia María “Un precursor hispano del CIL en el siglo XVIII: El Marqués de Valdeflores”. *Boletín de la Real Academia de la Historia*, CXCI, 1997, pp.499-516.

<sup>1853</sup> MARTIN ALMAGRO-GORBEA “Pedro Rodríguez Campomanes y las antigüedades” en ANES G. *Campomanes en su II Centenario*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2003, pp.117-159; CANTO, Alicia M. “El conde de Campomanes: arqueólogo y epigrafista”, *Boletín de la Real Academia de la Historia* 2001, pp. 25-53.

arqueológico recién descubierto en un fundo privado (en este caso real) aunque tutelado por la propia Corona. Centrémonos en los hechos históricos. El descubrimiento de los centros romanos de Pompeya y Herculano va a desencadenar una verdadera revolución en el campo de los descubrimientos del mundo clásico. Aunque las excavaciones ya habían comenzado parcialmente unos años antes, sería con la llegada de Carlos al trono napolitano cuando empezaría a adquirir un verdadero auge<sup>1854</sup>. Así desde 1738 comenzaría un proyecto auspiciado por Carlos III, aun rey de Nápoles, y que continuaría después de su marcha acceder a la Corona española en 1759. No se trataba de unos descubrimientos aislados sino que se va a ir formulando un verdadero proyecto de rescatar a la luz los restos de tres ciudades romanas que habían sido sepultadas por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Al mismo tiempo fue surgiendo una verdadera peregrinación cultural de eruditos y anticuarios que querían admirar in situ los hallazgos, en unos años de autentica veneración por lo clásico.

Dos hechos trascendentales van a surgir en el ámbito de la Protección Monumental: la sistematización de una excavación arqueología cuyo espacio va a ir obteniendo una identidad propia, y la configuración pública de la excavación sin perder el patrocinio real. Aunque las excavaciones no fueron ajena de polémicas, no cabe duda de que se va ir produciendo una intervención de cierta organización administrativa, diferente a otras que habían realizados en este momento, bajo la dirección real, que actúa como patrocinador, pero a diferencia de los particulares, lo hará como símbolo del Estado, ajeno a sus

<sup>1854</sup> Sin entrar en amplios detalles sobre la cronología de los hechos se debe de señalar que los primeros hallazgos de Herculano tuvieron lugar al comienzo del siglo XVIII, entre 1711 y 1718 bajo los auspicios del príncipe D'Elbouef en unos terrenos de su propiedad donde iba a construir una villa. Poco tiempo después, en 1716 la villa sería vendida al duque Falletti y las excavaciones se van a paralizar, quien las vendió a su vez a Carlos de Borbón. Una vez accedido al trono de Nápoles se plantearía la reanudación a gran escala de las excavaciones iniciadas anteriormente, siendo apoyada la iniciativa por la reina Amalia de Sajonia a lo que se uniría la propia tradición coleccionista de la familia de los Borbones. Desde octubre de 1738, las excavaciones serían dirigidas por el ingeniero militar del Rey Roque Joaquín de Alcubierre, quienes irían descubriendo un gran número de esculturas y pinturas murales. Entre 1740 y 1745 hay un parón en las excavaciones. En 1748 Alcubierre descubriría Pompeya y en 1750 aparece Estabia. En 1759 Carlos de Borbón accede a la Corona de España y abandona Nápoles dejando como rey a su hijo Fernando, que hasta su mayoría de edad gobernaría un consejo de Regencia encabezado por el erudito Bernardo Tanucci, un personaje amante de la arqueología, por lo que proseguirían las excavaciones. CALATRAVA, Juan *Arqueología y estética: el impacto de los descubrimientos de Pompeya y Herculano Arquitectura y cultura en el siglo de las Luces*, Universidad de Granada, 1999, pp.157-161; REPRESA, F. "Las primeras excavaciones borbónicas en Pompeya y Herculano", *Revista de Arqueología*, 76 (1987); FERNANDEZ MURGA, F. "El Rey y Nápoles: las excavaciones arqueológicas" en AA.VV. *Carlos III y la Ilustración*, Madrid, 1988, pp.375-384; FERNANDEZ MURGA, F. *Carlos III y el descubrimiento de Herculano, Pompeya y Estabia*, Salamanca, 1989; ALONSO, M.C. "Excavaciones arqueológicas en el siglo XVIII: el descubrimiento de las ciudades de Herculano, Pompeya y Estabia" *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, 3, 1996.

propios intereses<sup>1855</sup>. Las pinturas y demás objetos descubiertos pasarían a propiedad real, pero el futuro rey de España no lo va considerar como una propiedad personal, sino que formaría parte de la Corona napolitana, hecho que le desliga de las políticas que habían seguidos otros monarcas coetáneos<sup>1856</sup>. Sin embargo, no se puede considerar que estemos ya ante un verdadero museo público, ya que las piezas encontradas quedaban bajo la tutela del monarca. En la España Borbónica la Corona empezó a promocionar excavaciones con el objetivo primordial de dar a conocer la historia nacional, enraizada en la identidad monárquica, por lo que se supuso el hecho de ampliar las colecciones de antigüedades de la Casa Real, para lo que se diseñó una verdadera política de control de las excavaciones arqueológicas. El modelo utilizado por Carlos III en el ámbito italiano va a ser exportado en su nuevo destino como Rey: el solar hispano. Se puede afirmar el gran número de excavaciones arqueológicas que se realizaría en estos años bajo la iniciativa real, especialmente los realizados en Toledo, Segovia, Mérida y Barcelona, donde prácticamente se va a plantear el mismo modelo de tutela patrimonial: Se realizaban las excavaciones, primordialmente por miembros de la Academia de San Fernando, se realizaban dibujos de las piezas, a modo de inventarios, y finalmente se trasladaban una selección de obras que engrosaban las colecciones reales. Un ejemplo significativo podría el analizado por el profesor Jorge García Sánchez sobre las excavaciones en las termas romanas de Rielves (Toledo), que por orden de Carlos III dirigió durante un mes y medio Juan Pedro Arnal, que ocupaba el cargo de director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, centrándose en el levantamiento de planos y los diseños de una quincena de mosaicos hallados, mandándoles el Rey que algunos fueran extraídos y transportados a la Corte, publicándose posteriormente todos los

---

<sup>1855</sup> Como señala Juan Salas *Carlos consideró en un indudable rasgo de modernidad, que sus amadas antigüedades no le pertenecían a él sino al reino (...) Las excavaciones vinieron a hacer de Carlos el propietario de una enorme colección de pinturas que había que conservar, ordenar y disponer. Naturalmente, estaba fuera de lugar la idea de conservarlas en sus lugares de hallazgo, aún inaccesibles y con frecuencia posteriormente recubiertos. Para albergarlas, así como el resto de los objetos hallados, se habilitó en la villa de Carlos en Portici un museo (...) Aunque la autorización real para la visita no era excesivamente difícil de conseguir, no se trataba aún de un museo público en el pleno sentido de la palabra (...) representaba un indudable avance con respecto a los cabinets estrictamente privados de otras casas reales. Carlos no consideraba estas pinturas como propiedad personal suya –de hecho, no llevó a España ninguna-, pero se reservaba la autorización para visitar el museo, visita que adquiriría así el carácter de una muestra del favor regio y no de un derecho de toda la comunidad intelectual.* SALAS, Juan, 1999, p.165.

<sup>1856</sup> Podemos hacer referencia en las propias excavaciones realizadas anteriormente a las dirigidas por Carlos, las piezas encontradas pasarían a propiedad del príncipe D'Elbouef quien las enviarían después de la venta de su villa, a Francia y a Viena, al príncipe Eugenio de Saboya. SALAS, Juan, 1999, p.159.



dibujos y grabados que se habían hecho de la excavación, siguiendo las instrucciones del propio Monarca<sup>1857</sup>.

Unas series de excavaciones realizadas en la Lusiana (Sevilla) en la época de la Ilustración nos vuelven a cuestionar los aspectos a los que estamos poniendo énfasis, si son realizadas por iniciativa real o privada, cual es la finalidad de estas excavaciones, y sin estos objetos van a formar parte del patrimonio regio como identidad nacional. Jesús de Asencio Salas Álvarez expone como *nos encontramos ante una excavaciones de las que apenas se conocen datos referentes a su autorización, a su financiación, etc, a pesar de ser mencionados por viajeros ilustrados y haber sacado a la luz una serie de restos arqueológicos, perfectamente visibles en la actualidad*<sup>1858</sup>, aunque surgiera que la posible explicación a estas excavaciones menores habría que buscarlo en el afán coleccionista de la Corona española, surgido por la necesidad de incrementar el prestigio monárquico y defender sus privilegios, como consecuencia de la necesidad de la dinastía borbónica de integrarse en el país y entroncar plenamente con la Historia del país, a fin de encontrar argumentos que legitimasen su posición. Por ello, muchos de estos tesoros y antigüedades se depositarían en las distintas residencias reales, en el caso de los encontrados en la Lusiana se haría en los Reales Alcázares de Sevilla. Este hecho volvería a repetirse en otras intervenciones regias en la Península Ibérica, siendo un ejemplo significativo las excavaciones que se van a producir en la ciudad de Itálica en la segunda mitad del siglo XVIII. Itálica había sido uno de los centros más emblemáticos de la historia añeja de la provincia de Sevilla, desde su fundación en época romana, hacia el año y sus transformaciones posteriores primero con el emperador Augusto, y posteriormente con Adriano y Trajano, que le dieron su fisonomía de ciudad opulenta. Sin embargo, su destino cambió con el final del periodo romano, al decaer ya en la etapa visigoda y al ser abandonada con la invasión musulmana. Una larga historia de rapiña y abandono comenzaría desde la etapa cristiano medieval, perdiéndose su propio nombre e incluso creyéndose que se trataba de la antigua ciudad de Sevilla, por lo que comenzó a ser denominada Sevilla, la Vieja. Con la adquisición de Itálica por los monjes cistercienses de San Isidoro del Campo, a raíz de la cesión que el Guzmán cambiaría su destino.

El redescubrimiento de Itálica llegaría en la etapa renacentista<sup>1859</sup>, incrementándose su atención en los inicios del siglo XVIII cuando

<sup>1857</sup> GARCIA SANCHEZ, José “La Real Academia de San Fernando y la Arqueología” en *Academia Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Primer y segundo semestre de 2008, Número 106-107, p.24.

<sup>1858</sup> SALAS ALVAREZ, Jesús “Excavaciones arqueológicas de época ilustrada en la campaña sevillana” en MORA, Gloria; DIAZ ANDREU, Margarita *La cristalización del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*, Universidad de Málaga, Málaga, 1997, pp.99-101.

<sup>1859</sup> La magnificencia de la ciudad italicense queda plasmada en los textos de Andrea Navagero, embajador de Venencia a la Corte de Carlos I, en su *Viaje por España*, entre 1524 y 1526, Alonso Morgado en su *Historia de Sevilla*, Luis de Pereza (1535), Pedro de Medina (1548) y Ambrosio de Morales (1587). En 1567 se realizaría la primera ilustración de Itálica por Antón



paradójicamente se habían adoptados medidas devastadoras como la orden que en 1711 se realizó para la demolición del anfiteatro para construir con sus restos un dique frente al Guadalquivir, o la autorización mediante un edicto oficial de la explotación de la cantera de Itálica, que eran más que la moles de hormigón del anfiteatro y los restos de los muros que todavía habían pervividos, para emplear la piedra para el firme del Camino Real de Badajoz. hecho que despertó la inquietud por parte de algunos eruditos desde el segundo tercio del siglo ante la posibilidad de su desaparición, lo que dio una amplia producción bibliográfica dedicada a los restos de la ciudad romana como fueron las obras escritas por Joseph Pardo de Figueroa, *Breve disertación sobre la fundación, nombre y antigüedad de las ciudades de Sevilla o Hispalis, e Italica* (1732), Antonio Fernández Prieto y Sotelo (1740), Pedro de San Martín y Lara (1754) o el padre Enrique Flórez (1754)<sup>1860</sup>. Al mismo tiempo se pretendió realizar las primeras excavaciones oficiales bajo iniciativa real, por lo que con la llegada de Carlos III al poder, al igual que en otros lugares de España, se intentó que el nuevo monarca patrocinara las obras, hecho que no llegó a suceder, por lo que serían eruditos, anticuarios aislados, los que comenzaron a realizar las primeras intervenciones en los aún exiguos yacimientos. En el ámbito andaluz, puede ser Francisco de Bruna (1709-1807) el caso más representativo de la amplia nómina de anticuarios andaluces del momento, cuyo perfil nos va a ayudar a plantear la cuestión que centra este trabajo: cuál era la naturaleza jurídica de las antigüedades descubiertas. La personalidad de Francisco de Bruna y Ahumada va a llenar prácticamente todo el ambiente cultural de la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVIII<sup>1861</sup>. En su persona asumirá un amplio número de cargos, muchos de ellos relacionados con la administración de justicia. Al ser nombrado teniente alcaide del Alcázar, fijará en ella su residencia oficial, creando como buen ilustrado que fue, un gabinete de antigüedades. Su perfil de coleccionista plantea un doble plano que en cierta manera va a ser común en este momento: a nivel particular, era un gran aficionado de recoger un amplio número de curiosidades, como camafeos, monedas, una importante biblioteca, armas e instrumentos antiguos, e incluso un gabinete de Historia Natural, mientras que desde su cargo público va a promover la confección de la llamada Colección de Inscripciones y Antigüedades de la Bética, una gran parte de las piezas saldrían

---

van den Wyngaerde, concretamente el anfiteatro, con el título *Coliseo de Sebilia la Vechia*. El poeta Rodrigo Caro (1573-1647), exaltaría la magnificencia de la antigua ciudad romana con su *Canción a las ruinas de Itálica*, y al mismo tiempo conseguiría sentar las bases de la investigación arqueológica, cuyos trabajos tuvieron vigencias hasta el siglo XIX

<sup>1860</sup> CABALLOS RUFINO, Antonio; MARIN FATUARTE, Jesús y RODRIGUEZ HIDALGO, José M., *Itálica arqueológica*. Sevilla, 1999. pp.39-43.

<sup>1861</sup> De Francisco de Bruna existe una amplia bibliografía, ROMERO MURUBE, J. Francisco de Bruna y Alhumada, Sevilla, 1965; AGUILAR PIÑAR, prólogo al Catálogo de M.L. LOPEZ VIDRIERO, *Los libros de Francisco de Bruna en la Biblioteca del Rey*, Sevilla, 1999; LUZÓN NOGUÉ, José María *Sevilla, la vieja. Un paseo histórico por las ruinas de Itálica*. Fundación Focus-Abengoa, Sevilla, 1999.

de la ciudad de Itálica. Un gran número de estas piezas procederían de Mulva, la Lusiana, Cantillan, La Carolina, la Carlota, el Arahál, Estepa y especialmente de la ciudad de Itálica, ciudad que excavó profusamente desde 1781.

El coleccionismo privado va a ser una realidad indiscutible en estos años en manos de eruditos, políticos de prestigio cercanos a la Corte, como fue el caso de José Nicolás Azara (1730-1803), ministro de España en Roma dese 1781, que reuniría en el extranjero una gran colección de antigüedades procedente de toda Europa, regalando a su muerte el conjunto de sus esculturas clásicas a Carlos IV. Al mismo tiempo que han ido apareciendo coleccionistas privados amantes de la historia del arte se ha ido desarrollando un amplio mercado fraudulento, donde se perderán un amplio número de piezas sin ningún tipo de control oficial, como ocurrió en el caso de Itálica. Podemos cuestionarnos cuál era el papel de la Administración Real en este caso, si el coleccionista privado necesitaba de una autorización oficial o por el contrario gozaba de una libertad de acción. La actitud de Francisco de Bruna en Itálica constituye un ejemplo significativo del debate que estamos planteando si las piezas descubiertas serían consideradas como de dominio público o pasarían a engrosar a su colección privada. Debemos de partir de la base dos hechos indiscutibles:

1º) Itálica formaba parte del patrimonio de los jerónimos del monasterio de San Isidoro del Campo, por lo que en principio los bienes descubiertos serían propiedad de la institución eclesiástica<sup>1862</sup>.

2º) Las obras arqueológicas excavadas por Bruna serán recogidas en nombre del Rey y con autorización de Floridablanca, secretario de Estado, quien le había aprobado el proyecto e incluso lo financió con dinero del Estado<sup>1863</sup>. El propio Bruna enviaría una carta a Floridablanca el 17 de noviembre de 1781 dando cuenta de todas los bienes que se habían descubiertos en las ruinas<sup>1864</sup>, e incluso solicitaba su intersección ante S.M. Carlos III, para que ordenase al prior del Monasterio de San Isidoro del Campo la entrega para su Museo de los Reales Alcázares.

La cuestión que nos planteamos es que si el terreno era propiedad de los jerónimos de San Jerónimo cual era el motivo de que no reclamara las

<sup>1862</sup> RODRIGUEZ HIDALGO, José María La colección arqueológica de Itálica. Apuntes sobre su ampliación e institucionalización durante el siglo XIX en BELTRAN FORTES, José; CACCIOTI, Beatrice y PALMA BENETUCCI, Beatrice (editores), *Arqueología, Coleccionismo y Antigüedad. España e Italia en el siglo XIX*. Universidad de Sevilla, pp.549.

<sup>1863</sup> Dicho Señor Bruna, como sabio apreciador de estos despojos de la Antigüedad, se halla autorizado por el Excmo. Sr. Conde de Florida Blanca, para recoger todos los que pueda, para su conservación en el Real Alcázar de Sevilla, del que es Alcayde.

<sup>1864</sup> ARRIBAS, F. "Datos y documentos sobre arte procedentes del Archivo General de Simancas: Hallazgos arqueológicos en el siglo XVIII", *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, XVI, Valladolid, p.188.

antigüedades clásicas encontradas. Más aún cuando en estos años desempeñaba el cargo del prior, Fray Zeballos, un amante del mundo de las antigüedades, que dejó constancia del conocimiento erudito de la ciudad romana en su conocida obra *Itálica*<sup>1865</sup>, e intentó menguar el expolio que los propios monjes del convento habían realizados y todo tipo de particulares<sup>1866</sup>. Algunos autores consideran que las ruinas antiguas eran consideradas del patrimonio real, por lo que solamente realizar excavaciones con una autorización oficial que solamente conseguía la Academia de la Historia, por lo que es obvio pensar que estas piezas pasaran al patrimonio del Monarca. Lo que es claro que en 1788 comenzaría el traslado de las esculturas encontradas en Itálica al Alcázar, con un matiz netamente diferenciador de otras colecciones del momento: su carácter público<sup>1867</sup>. Más aún cuando probablemente la autoridad del Rey primaría sobre el propio Monasterio, como podemos observar en la Petición que hace Floridablanca a Bruna el 27 de octubre de 1788: (...) *quiere el Rey se conduzcan luego las estatuas halladas en el Monasterio de Santiponce a ese Real Alcázar de Sevilla (...) Para este efecto prevengo con esta fecha al Prior la voluntad y resolución del Rey para que lo tenga entendido; y a V.S. se lo participo para su*

---

<sup>1865</sup> ZEVALLOS, Fr. Fernando de *La Itálica* Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 1983 (1886), Fundación de Aparejadores de Sevilla. En el prólogo, encontramos en la descripción de Zeballos la mirada de un romántico: *Llegué al pequeño collado que hoy llaman Sevilla, la vieja, sito a la orilla del Guadalquivir, hacia el poniente, y después que rodeé su antiguo y grueso muro, siguiendo algunas veces sus vestigios a tientas, me lexiones. (...) No podía apartar de mi el pensamiento que había oído de componer el Epitafio de la yerta y sepultada Itálica (...) No puedo pretender mas en un asunto dado el olvido de muchos siglos, ni puede pedir más un muerto reducido a polvos; aunque haya sido en sus tiempos un coloso.*

<sup>1866</sup> La descripción que nos da Zevallos sobre el anfiteatro es un claro testimonio del expolio al que estaba constantemente sometido el yacimiento arqueológico: *El anfiteatro es la ruina más sobervia y sobresaliente de quantas duran en Itálica. Por su mole da en los ojos, aun de los que pasan por el camino público, que no cae lejos (...) De aquello ha perdido ya mucho, sea por los esfuerzos del tiempo que no deja en algún instante de trillar los edificios expuestos a toda injuria. Especialmente por los grandes terremotos que hubo después, se han desplomados muchas bobedas y también por haberle quitado muchos sillares o piedras cortadas, para emplearlas en otras fábricas. Puede afirmarse por amor a la verdad, que quien menos ha usado deste recurso ha sido el dicho Monasterio, que solo gasta en sus obras los pedazos menudos y desechos que ruedan separados o disipados sobre las tierras, o las tierras que no componen ya fábrica digna de conservarse. En algunas obras públicas que se han hecho en Sevilla, se arbitró el medio de llevar materiales de las ruinas de Itálica, y ha sido necesario, que el Monasterio haya sacado a veces provision de la Real Audiencia, para impedir el derribo destas pocas antigüedades que restan. El Anfiteatro a pesar de todas las dichas injurias conserva todavía mucho de su antigua forma* ZEVALLOS, F., 1983,

<sup>1867</sup> José Ramón López Rodríguez es tajante a la hora de considerar el carácter público de la colección del erudito sevillano: *El gran proyecto de Bruna será la creación en el Alcázar un museo de arqueología, que él llamará la Colección de Inscripciones y Antigüedades de la Bética. Y lo más significativo, muy en consonancia con los tiempos, es que está colección será de carácter público. Lo es porque cuenta con la aprobación real, a través de Floridablanca, y porque de hecho es financiada con fondos del Estado. A fin de cuenta el Alcázar pertenece a la Corona. Y en nombre del Rey recogerá Bruna toda antigüedad que se ponga a su alcance* LOPEZ RODRIGUEZ, Ramón Historia de una escultura. Un viaje a través del coleccionismo público en Sevilla, BELTRAN FORTES, José; CACCIOTI, Beatrice y PALMA BENETUCCI, Beatrice (editores), *Arqueología, Coleccionismo y Antigüedad. España e Italia en el siglo XIX*. Universidad de Sevilla, 2006, p.286.

*cumplimiento*. Anteriormente, el 15 de octubre de 1788 el propio Bruna había enviado a Floridablanca una carta para que el rey ordenase al prior del monasterio de la Cartuja de Santiponce que le entregase unas esculturas aparecidas en Itálica, *para colocarlas en el salón entrando de los jardines del Alcázar, donde tengo puestas las estatuas e inscripciones de la Bética, que he podido recoger (...)*, subrayando que su destino no es meramente privado sino que pasaría a formar parte de las colecciones reales: *sería un dolor que esto no se traiga á este palacio de el rey, donde estarán bien conservadas y se podrán reparar de algunos pedazos que le faltan, en caso de no encontrarlos en el paraje de donde se sacaron*. José Beltrán puntualiza que *lo novedoso frente a otras colecciones era ese carácter oficial que tuvo la colección, al menos la de esculturas e inscripciones; se hacía en nombre del Rey y se colocó en el Real Alcázar (...)*. Sin embargo, cuando el Monarca va a ordenar que sea enviadas las esculturas una vez se encontrara en el Alcázar, Bruna expuso un gran número de alegaciones para que se retardase su envío, los que nos lleva a pensar que estaba actuando como un verdadero coleccionista privado, que no quería separarse de sus piezas anticuarias por ningún motivo<sup>1868</sup>.

La muerte de Bruna en mayo de 1807 va a replantear la cuestión de la propiedad de la colección de los bienes arqueológicos y de cuadros que había ido depositando en el Alcázar a lo largo de sus cuarenta años de haber desempeñado el cargo de Alcaide. Como apunta López Rodríguez, *el problema consistía en la ambigüedad que se había mantenido siempre entre lo privado y lo público, lo que era personalmente de Bruna y lo que era de la Corona*. Entre los pretendientes se encontraría la Academia de Bellas Artes de Sevilla o la propia Corona, quien intervendrá pidiendo noticias del museo del difunto y de sus colecciones, originándose un conflicto con la Academia de Bellas Artes de Sevilla. La cuestión no quedaría zanjada definitivamente como lo prueba que una parte de la colección quedaría dispersa al pasar a manos de distintas instituciones, entre ella la Corona, quedando algunas obras en el Alcázar que sufrirían poco tiempo después del saqueo de 1808 a raíz de la sublevación de Sevilla contra las tropas francesas acabaría con las colecciones del Alcázar<sup>1869</sup>. Con el tiempo, el resto de la colección de Bruna sería el germen del Museo Provincial de Sevilla.

Sin embargo, no podemos obviar la existencia de un coleccionismo privado de antigüedades clásicas, alejado de una iniciativa real, que le daría su perfil oficialista, y que va a ser practicado por un gran número de ilustrados,

<sup>1868</sup> BELTRAN FORTES, José “La escultura clásica en el coleccionismo erudito de Andalucía (siglos XVII-XVIII)” en *Actas del Simposio sobre el coleccionismo de la escultura clásica en España*, Museo Nacional del Prado, 21 y 22 de mayo de 2001,

<sup>1869</sup> Consta por los Informes de Ceballos, sucesor en el cargo de teniente alcaide interino de los Reales Alcaldes a la muerte de Bruna, que fueron trasladados a Madrid un gran número de piezas de la colección pictórica pasarían a la propiedad de la Corona como la famosa Adoración de los Reyes de Velázquez, mientras que la Academia se quedaría con otro grupo de pinturas de menor valía artística.

como fue el caso del descubrimiento de un tesoro numismático por un vecino de la Carolina, quien se lo comunicó al Alcalde de la localidad, Antonio Lomas, que en compañía de un notario reconoció el hallazgo, que al mismo tiempo le sería comunicado al Conde de Floridablanca (11-02-1790), del que extraemos algunos fragmentos: *Aunque en toda materia de descubrimiento de tesoros debo entenderme con el Subdirector General de V.E. según la Instrucción que rige para la Recaudación de Bienes Montrescos, Vacantes y Abintestatos (...) el descubrimiento de Alhajas no pueden considerarse en el seguimiento del juicio por un material o intrínseco valor, y si por la estimación a que les haga dignas de su antigüedad, mérito y recomendación y además es un monumento, que tanto puede contribuir a la Historia, a la Ciencia o estudio Numismático, y tal vez a utilidad del Estado por algunos respectos, que no alcance mi limitación, me ha parecido no solo conveniente, sino muy propio de mi obligación dirigirme desde luego a V.E. con esta reverente representación, a efectos de que, instruido su elevado ánimo, ilustración y sabiduría de este hallazgo se digne resolver lo que sea de su superior agrado, y ordenarme el modo y forma en que deba conducirme en el asunto.* Floridablanca dispuso a través de la Real Orden del 23-02-1790 la remisión a Madrid del tesorillo de monedas republicanas e imperiales<sup>1870</sup>.

### **3.4. Las prerrogativas de los particulares y el interés regio en la configuración del primer sistema normativo del Patrimonio Arqueológico en el reinado de Carlos IV: La Real Cédula de 1803.**

La conocida promulgación de la Real Cédula del 6 de junio de 1803, primera referencia jurídica del derecho patrimonial histórico-artístico español al definirse por primera vez lo que se entendía por Monumentos Antiguos, primera denominación en la literatura jurídica sobre el bien a proteger. Siguiendo a Maier nos encontramos ante la primera medida legislativa promulgada en España y en Europa relativa a la conservación del Patrimonio Arqueológico<sup>1871</sup>.

#### **3.4.1. La confección de la Real Cédula de 1803: El Plan General para la conservación de los monumentos antiguos confeccionado por los académicos de la Historia, José de Guevara, Tragia y Bossarte.**

Conocemos las vicisitudes de la elaboración del proyecto por el estudio que Maier realizó a raíz del II centenario de su promulgación, por lo que Urquijo, primer secretario de Estado enviaría un oficio a Antonio Capmany para que la Academia propusiera un proyecto definiendo cuales eran las medidas que habían que adoptar para la protección del legado histórico digno de proteger. Sería Mariano Luis de Urquijo (1768-1817), primer secretario de

---

<sup>1870</sup> SALAS ALVAREZ, Jesus de la Asención *La recuperación del patrimonio Arqueológico de Andalucía durante la Ilustración (1736-1808)*. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla.

<sup>1871</sup> Se considera por algún sector de la doctrina esta norma técnicamente precaria, RAMON FERNANDEZ, Tomás “La legislación española sobre el Patrimonio Histórico-Artístico. Balance de la situación de cara a su reforma” *Revista de Derecho Urbanístico*, Año XII, 60, Octubre, Noviembre-Diciembre, 1978, pp.14-15.



Estado de Carlos IV, el que proyectó la idea de elaborar un medio a propósito para conservar los descubrimientos hechos o que se hiciesen de antigüedades y demás restos dignos del aprecio de las gentes cultas, por lo que enviaría un oficio a Antonio Capmany: *Así quisiera yo que la Academia se ocupase de meditar sobre este punto, proponiéndome cualquiera idea ventajosa que pudiese ocurrirla; y entonces se vería si podíamos o no contar con haber hallado el medio, aunque harto difícil, de arrancar de las manos de la ignorancia, que puede llamarse brutal, tantos restos preciosos de la Antigüedad, como encierran nra Península.* El Junta Académica de 27 de junio de 1800 se acordó nombrar una comisión integrada por José de Guevara, Tragia y Bossarte, presentándose poco tiempo después, el 13 de noviembre de 1801, en la que expondría la definición de los distintos restos de las antigüedades que habían de someterse a protección y en el modo que había de llevarse a cabo. *Tres son los respetos con que se deben de mirar las antigüedades, y son: su descubrimiento, su explicación y su conservación y custodia, para lo que se estima necesario: 1º que S.M. autorice a la Academia para que tenga la inspección general de las antigüedades que se descubran en todo el Reyno y que se comuniquen a los Prelados, Cavildos, Intendentes y Corregidores la correspondiente orden a fin de que den a la Academia los avisos de qualquier hallazgo de Antigüedad. 2º que esta forme e imprima una instrucción circunstanciada para que con arreglo a ella se le de noticias de los descubrimientos que se hagan. 3º que haya algunos caudales prontos para las gratificaciones y demas gastos que se ofrezcan en este ramo, cuya regulación se propondrá antes el Ministerio. 4º que la Academia según las noticias que reciba informe a S.M. lo que juzgue conveniente en el caso particular de que se le de noticia.*

Ya se pone en evidencia la extradición de un amplio número de objetos de interés histórico y artístico por falta de la debida inspección pública, convirtiéndose en preocupación constante del legislador posterior de la España Liberal, como queda reflejada en los siguientes términos: *convencida la Academia de la importancia de este encargo del Ministerio y de la utilidad del pensamiento, que ya en otro tiempo había meditarlo ponerlo en S.M. como objeto propio de su instituto y de la gloria de nuestras antigüedades que por falta de inspección pública autorizada se pierden o se abandonan a la codicia literaria de los extranjeros que las extraen del reyno ha trabajado el informe que reducido a un plan general y como preliminar por ahora, tiene la satisfacción de presentar y patriótico celo de V.E. como una muestra de la confianza que tiene de alta protección y de la complacencia con que abrazaría el Cuerpo esta honorífica y grave comisión.* Una reflexión sobre la conceptualización jurídica de los bienes a tutelar va a ser el objetivo preliminar a la hora de confeccionar el Plan, dividiéndolo en *sagradas, y Eclesiásticas, o en profanas y seculares*, perteneciendo a la primera clase pueden considerarse los *Templos, Idolos, Sacrificios y Estatuas que representen divinidades sacerdotes de qualquier especie y todo lo perteneciente a la religión sea gentiliza o christiana, comprendiendo en ella las Aras dedicaciones y aun los mismos sepulcros*, distinguiéndolos los llamados bienes de segunda clase, o sea los profanos, *aquellos monumentos que no tengan relación directa con estos objetos sagrados*, distinción quizás fundamentada en el hecho de establecer un régimen



jurídico distinto de unos y otros bienes. De la misma manera va a distinguir en el ámbito de estos bienes *en la misma clase de monumentos que se encuentre por que pueden ser edificios, estatuas lapidas o inscripciones, medallas vasos, etc. De estos unos son de fácil y otros de difícil o imposible transporte*, delimitando la diferenciación entre los bienes muebles e inmuebles, con su carácter jurídico de movilidad, subrayándose que sería conveniente *que todos ellos se examinen, por que cada uno puede contribuir a aclarar puntos históricos y acaso algunos interesantes a la nación, y a la perfección misma de las artes es necesario que se conservasen con toda la integridad posible para que puedan examinarlos personas inteligentes que hagan una exacta descripción de ellos y expongan su mérito*. A estos bienes se unirían las *Escrituras de Donaciones, privilegios y demás monumentos que se encuentren en Archivos o Bibliotecas o en poder de los particulares o que la casualidad descubra, y pueden hacer parte de la antigüedad literaria ya sagrada ya profana*.

Sin embargo, la aportación más trascendental en el ámbito jurídico sería el reconocimiento del derecho de los particulares sobre el bien descubierto, como podemos resaltar en algunos fragmentos del Plan: 1º) El descubrimiento ha sido por lo general efecto de *lacausalidad por qué son pocos los que se exponen a los gastos de una escavacion para encontrar antigüedades, y en este caso debe el descubridor hacerse propio el monumento que descubre a menos de ser este de un gran tamaño o que necesite especial protección del Gov.;* 2º) La explicación de las antigüedades que se descubran no puede ser privativa de nadie, sino común a todos los que sepan explicarla, y así la Academia no pretende abrogarse este privilegio sino *unode los muchos q. concurran con las luces y conocimientos de sus Individuos a la explicación de monumento descubierto;* 3º) Se estimulará los hallazgos arqueológicos con una *recompensa gratificación o precio que se aplique al verdadero descubridor a fin de extimular a otros en este género de industria antiquaria que conviene propagar en la Nación*. Frente a la concepción privada se va a ir abriendo paso la idea de una utilidad pública en la conservación del Patrimonio Monumental bajo el patrocinio del Monarca: *En esta sucinta y general idea que acaba de extender y tiene el honor de dirigir a V.E. la Academia, cree estar haber manifestado sus vivos deseos de contribuir por su parte al fomento de este nuevo ramo de ilustración política pública cuya importante empresa espera se sirba V.E. patrocinar con su poderoso influxo al beneficio animo de S.M. siempre propenso a sostener todos los objetos de utilidad y lustre nacional*. De esta manera el Monarca se convertía, siguiendo los ideales de la Ilustración en el verdadero promotor de la conservación del legado patrimonial en beneficio del pueblo. El Plan dejaba a la Real Academia de la Historia en el verdadero órgano administrativo tutelar del Patrimonio Monumental, al pedir al Monarca *queautorizase a la Academia para que tenga la inspección general de las antigüedades que se descubran en todo el Reyno y que se comunique a los Prelados, Cavildos, Yntendetes y Corregidores la correspondiente Orden a fin de q den a la Academia los avisos de qualq hallazgo de antigüedad, para que este forme e imprima una instrucción circunstanciada para q con arreglo a ella se le noticia de que los descubrimientos que se hagan (2º), que haya algunos caudales prontos para las gratificaciones y demás gastos que se ofrezcan en este ramo, cuya regulación se*

*propondrá ante el Ministerio (3º) y que la Academia según las noticias que reciba informe a S.M. lo que juzgue conveniente en el caso particular de que se le dé noticia (4º). Se dejaba claro un papel diferenciador con la Real Academia de Bellas Artes, por lo que cuando se considerara que dichos bienes solamente tuviese un interés artísticos, al no ser objeto directo del instituto de la Academia de la Historia, podría estar parte encargarse la de Sª Fernando, a quien la de la Historia la facilitara las noticias siempre q estubiese corriente la correspondencia que se ha propuesto.* El Plan General sería remitido al Primer Secretario de Estado, Pedro Cevallos Guerra (1764-1840), el 19 de noviembre de 1801. El 30 de enero de 1802, Pedro Cevallos comunicaba de Real Orden que el Rey había aprobado todas las disposiciones propuestas en el informe de la Real Academia, por lo que por Real Orden se solicitaría a la Real Academia de la Historia que remitiera al Consejo la instrucción que había de formar sobre el reconocimiento y conservación de los monumentos antiguos que se descubrieran en el reino<sup>1872</sup>. La Instrucción formada de Orden de S.M por la Real Academia de la Historia, sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reyno, que sería elaborado por la Sala de Antigüedades, sería aprobada en Junta Ordinaria el 29 de mayo de 1802 y remitida a Pedro Cevallos, siendo expedida definitivamente el 6 de julio de 1803<sup>1873</sup>.

### 3.4.2. Análisis de la Ley.

Como apunta Maierse trata de un articulado muy corto, en el que se echan en falta algunos aspectos importantes. En primer lugar, no hay referencia a la exportación de antigüedades, un tema realmente delicado que tuvo que ser incorporado pocos años después. En segundo lugar, no se dan normas sobre la concesión de permisos o licencias de excavación, una medida preventiva, aunque quizás difícil de establecer. Y en tercer lugar, no se regularon las sanciones para aquellos que no cumplan los dictado, extremo siempre necesario para el eficaz cumplimiento normativo<sup>1874</sup>.

#### *El Preámbulo*

El preámbulo, estaría dirigida a todas las autoridades civiles y a todas aquellas personas que pudiesen afectarles la cédula. En ella se establecía los motivos por lo que se expedía: *Que pusiese a cubierto las antigüedades que se descubren en la Península de la ignorancia que suele destruirlas, con daño de los conocimientos históricos y de las Artes, a cuyos progresos contribuyen en gran manera (...).* Al mismo tiempo se respaldaba definitivamente la función primordial de la Real Academia de la Historia en la protección y conservación

<sup>1872</sup> MAIER ALLENDE, Jorge *Noticias de Antigüedades de las Actas de Sesiones de la Real Academia de la Historia (1792.1833)*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2003, p.97.

<sup>1873</sup> MAIER ALLENDE, Jorge "II Centenario de la Real Cédula de 1803. La Real Academia de la Historia y el inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico y Monumental en España", *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 200, Cuaderno 3, 2003, pp.439-473.

<sup>1874</sup> MAIER, Jorge, 2003, p.459.

del patrimonio histórico: *la inspección de las antigüedades que se descubran en todo el Reino*. Se disponía la medida con fuerza de ley dirigidas a todas las autoridades pertinentes: *Y siendo forzoso, para que pueda ejercerla, que todas las personas que tienen conocido influjo, autoridad y jurisdicción, Prelados, Cabildos y Corregidores le den aviso de todos los hallazgos de antigüedades que lleguen a su noticia, y le presten auxilio en todo cuanto penda de sus facultades*. El articulado de la Instrucción se compondría de siete puntos, en la que Maier precisa *comore resulta un tanto escuálido, si lo comparamos con otras medidas legislativas semejantes, aunque, lógicamente se adaptan a la realidad política y social de la España de entonces*.

#### *Conceptualización jurídica de las antigüedades.*

En el artículo I se especifican cuales son los bienes que hay proteger enumerando primeramente las estatuas, bustos y bajorrelieves, quizás por el ansia coleccionista de escultura clásica que se habían caracterizado la Monarquía española desde los tiempos de Carlos I, acrecentados con los Borbones. Seguidamente incluye bienes inmuebles propios de las Antigüedades Clásicas como fueron los templos, teatros, anfiteatros, circos, etc, a los que uniría todo tipo de bienes muebles propio de la Antigüedad Clásica, *mosaicos, monedas de cualquier clase, camafeos, trozos de arquitecturas, columnas miliarias, instrumentos músicos como sistros, liras, crótalos; sagrados, como preferículos, símpulos lituos, cuchillos sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos, trípodes; armas de todas las especies, como arcos, flechas, glandes, carcaxes, escudos; civiles, como balanzas y sus pesas, romanas, relojes solares o maquinales, armillas, collares, coronas, anillos, sellos; toda suerte de utensilios, instrumentos de artes liberales y mecánicas*. La relación de bienes finalizaría con *finalmente cualesquiera cosas aún desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean Púnicas, Romanas, Cristianas, ya Godas, Arabes y de la baxa edad*, por lo que se integraba bienes propios de culturas no clásica, teniéndose ya en cuenta los pertenecientes al mundo paleocristiano, visigodo, árabe y de la baja Edad Media, en un momento en que se estaba revalorizando por la incipiente historiografía artística de España. Cabe mencionar como algunos posibles de interés histórico y artístico fueron exceptuados como tales al no ser calificados como antigüedades de acuerdo con lo que estaba dispuesto en la Real Cédula. Un ejemplo de ello podemos encontrar en el oficio de que se envía a la Real Academia de la Historia para informar sobre el estado de ruina en que se encontraba el castillo de Lepe (Huelva), siguiendo las disposiciones establecidas por la Real Cédula.

#### *La titularidad de los hallazgos de bienes arqueológicos en dominio público y privado.*

En el artículo 2 se dispondría algunas consideraciones sobre la propiedad y custodia de los hallazgos, estableciéndose una distinción entre los que estuviesen en propiedad privada, pública o de realengo. En principio parece

que se respeta el principio de la propiedad privada, al establecerse que *De todos estos monumentos serán dueños los que hallasen en sus heredades y casas, o los descubran a su costa y por su industria*. La propiedad por consiguiente corresponde a su dueño a quien lo haya hallado a su costa, y a ellos corresponden su conservación. Si se encontrase en propiedad pública o de Realengo, los que los descubran *cuidarán de recogerlos y guardarlos los Magistrados y Justicias de los Distritos*. Todos los descubrimientos, fueran privados o públicos, tenían que ser enviados a la Academia de la Historia, al mismo tiempo que sería el órgano encargado de resolver las cuestiones de la adquisición del bien, *por medio de compra, gratificación, o según se conveniese con el dueño*. Se estaba consagrando por consiguiente la distinción de lo público y lo privado en el régimen de protección del Patrimonio Monumental, que sería una constante en la legislación española posterior.

Un caso significativo sobre la prioridad del derecho privado en el ámbito tutelar del Patrimonio Monumental a raíz de la promulgación de la Real Cédula de 1803 lo constituye el caso del descubrimiento de monedas de plata árabes en un fundo privado, y reclamo por su supuesto descubridor, Francisco Beltrán de Guevara, secretario del Cabildo de la Santa Madre Iglesia Catedral de esta ciudad. En el **Oficio de 31 de julio de 1806** que enviaría Beltrán a la Real Academia de la Historia expondría el supuesto de hecho en los siguientes términos: *Que habiendo proyectado ensanchar una casa de campo que tiene en heredad propia (...) principió las obras y en unas de las zanjias que se abrieron para sacar el cimientto se halló un tarro de barro que contenía porción de monedas o medallas de plata con caracteres arábigos; de cuya intención dio cuenta al Juzgado de esta intendencia donde se entregó las monedas cumpliendo lo prevenido en la Real Orden de 6 de julio de 1803. Con arreglo a los artículos 1º y 2º solicitó se le devolviesen, o su valor, las dos opciones que serían recogida posteriormente en la legislación liberal, alegando que hasta ahora no lo ha conseguido*. El 26 de agosto de 1806 sería comunicado por la Real Academia de la Historia al legítimo dueño *que reconocidas las monedas de plata árabes presentada al mismo tiempo con la mayor brevedad posible, tomará la resolución conveniente para que se le devuelvan a V. como dueño del descubrimiento o se le reintegre de su valor, dando el aviso oportuno al Intendente de esa ciudad para que han sido remitidas*. Al mismo tiempo en el Oficio de 2 de septiembre de 1806 la Real Academia de la Historia acordaría que una vez examinada las monedas de plata árabes que fueron descubiertas en las excavaciones hechas en terreno de la pertenencia de V. y remitidas por el Intendente de esta ciudad, *y aunque nada tienen de particular o extraño en la numismática arábica, y la Academia posee estas y otras diferentes de los mismos reyes a que pertenecen, ha acordado separar para su museo 12 de ellas por hallarse mejor conservadas y me encarga se lo manifieste a V. y le proponga su compra, siempre que sea solo al peso, por ser comunes y no merecer otra estimación, poniéndose así en práctica el derecho de adquisición del Estado, a través en este caso de la Real Academia de la Historia, como órgano institucional administrativo del Patrimonio Monumental, siempre que en este caso el dueño*

así le conveniere, por lo que en caso afirmativo, se le remitiría *el dinero por medio de la persona a que se entreguen las demás para devolverlas al Intendente de cuyas manos podrá recogerlas*. Finalmente, en la Minuta de oficio de 13 de septiembre de 1806 en que se informa de la devolución de las monedas árabes a Nicolás Díaz, asistente de la ciudad, para que se le entregue a su dueño, excepción de 12 que pasan a formar parte del Museo de la Academia.

En el artículo tercero se establece la cooperación de las autoridades eclesiásticas, para proporcionar datos a la Academia, al ser consideradas, personas ilustradas, así como los Magistrados seculares, indagando y adquiriendo noticias de los hallazgos, y poniéndolos en la de la Academia, según y para los fines enunciados en el artículo 2º. De gran innovación responde el artículo 4 al establecer la manera de registrar los hallazgos que se encontrara: *Los descubridores tendrán el mayor cuidado de notar puntualmente el parage de los hallazgos, para que por este medio pueda la Academia conjeturar ó resolver á qué Pueblo, Colonia, Villa, Lugar, río, monte ó valle conocido, y hácia qué región celeste de ellos, esto si, si al Levante, Norte, Sur ó Poniente*. El artículo 5 trata sobre las antigüedades halladas en otros tiempos, sobre los que manda a sus dueños o Justicias dar noticias a la Academia. Por otra parte, en la Real Cédula de 1803 se especifica que cualquier clase de hallazgo que se produjese había de ser comunicado al Secretario de la Real Academia de la Historia. Es decir, dos son pues los dos únicos cauces por los que la Academia tenía noticia de los descubrimientos o cualquier incidencia con las antigüedades. Por una parte, directa a través de sus correspondientes o autoridades civiles o eclesiásticas, por otra, por notificación de la Primera Secretaría de Estado la cual requería a la Academia el informe preceptivo que a su vez pasaba a la Sala de Antigüedades<sup>1875</sup>. Al mismo la Academia gratificaría a los poseedores de los materiales hallados, verdadero precedente de los incentivos por parte de la Administración sobre los particulares, aun con la paradoja de quedarse a su cargo el traslado de los objetos: *La Academia quedará agradecida á los buenos patriotas que coadyuven a la ilustración de la patria por el medio de buscar, conservar y comunicarla los monumentos antiguos arriba nombrados; sin que por eso dexe de satisfacer á los poseedores de las cosas halladas el tanto en que se convinieren, quedando la conducción de ellas á cargo de la Academia*. Se diferenciaba por consiguiente entre los descubridores y los poseedores del bien de interés histórico y artístico, que se convierte en la verdadera base del orden jurídico del Patrimonio Monumental. El artículo 7 establecía las obligaciones de los Justicias de los Pueblos en orden a la conservación de los Monumentos Antiguos, poniéndose las bases de definir una política protectora de conservación de los restos hallados y de las ruinas, que será en el futuro objeto de una extensa legislación, entre cuyas obligaciones estaba el *cuidar de que nadie destruya ni maltrate los monumentos descubiertos ó que se descubrieren, puesto que tanto interesan al honor, antigüedad y nombre de los Pueblos mismos; tomando*

---

<sup>1875</sup> MAIER ALLENDE, Jorge *Noticias de las Antigüedades de las Actas de Sesiones de la Real Academia de la Historia (1792-1833)*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2003, p.23.



*las Providencias convenientes para que así se verifique.* Al mismo tiempo que lo mismo practicarían en los edificios antiguos que hoy existen en algunos Pueblos y despoblados, sin permitir que se derriben, ni toquen sus materiales para ningún fin; antes bien cuidarán de que se conserven: y en el caso de amenazar próxima ruina, lo pondrán en noticia de la Academia por medio de su Secretario, á efecto de que esta torne las providencias necesarias para su conservación, incluyendo por tanto la protección tanto a bienes muebles como inmuebles de interés histórico y artístico. Así, como consecuencia de la Real Cédula la Academia comenzó a recibir distintas comunicaciones sobre hallazgos arqueológicos, excavaciones y propuestas para la conservación monumental.

### **3.4.3. La aplicación de la Real Cédula de 1803: La Real resolución del 25 de junio de 1806.**

La aplicación de la Real Cédula de 1803 tuvo una amplia dificultad, pero abrió el camino de una sensibilización pública de tutela de las antigüedades, como lo demuestra el Informe de Diego Clemencín de 01/04/1803 que hizo presente como Revisor de las Antigüedades la conveniencia de imprimir una circular dirigida a los curas párrocos y otras personas especialmente del reino de Sevilla, en la que se les pida noticias de inscripciones y otros monumentos, siendo aprobada dicha propuesta por la Real Academia<sup>1876</sup>. La cuestión de la propiedad privada y el libre movimiento de las piezas encontradas en el caso de la exportación será una preocupación constante en los años posteriores a la publicación de la Instrucción, más aun cuando la Real Cédula no dejaba resuelta los problemas que conllevaban, como refleja el Informe de Isidoro Bonarte del 17 de agosto de 1804 en relación de las antigüedades a las antigüedades descubiertas cerca de Baza por el Marqués de Diezma que éste no puede continuar las excavaciones por encontrarse en terreno particular, por lo que insta a que se le indique como se puede superar esta dificultad<sup>1877</sup>. Un caso significativo estudiado por Maier, puede ser ilustrativo de la situación del momento, fue el destino de los objetos romanos encontrados en las poblaciones de Pozas y Salas de Bureba, por Gregorio González Azaola, corriendo el riesgo de salir de España. El 3 de julio de 1806, Pedro Cevallos denuncia que se ha trasladado a la casa del alcalde Pedro Pablo Echevarría, por orden del teniente alcalde Pedro Pablo Echevarría, ciertas antigüedades halladas cerca de la villa de Poza y Salas de Bureba (Burgos), con el fin de ser enviada a un individuo residente en Roma. El 11 de junio de 1806 mediante una Minuta de Oficio se advierte que las antigüedades halladas en Poza de Sal no puede viajar a Roma, al establecerse por la Real Cédula de 1803 que la Academia la inspección de todos los monumentos de Antigüedad y el 13 de junio se informa por la propia Sala de Antigüedades, que mientras que la Academia verifique los hechos, se suspenda la extracción de los monumentos depositados en la casa del Alcalde de Poza de la Sal, que pretende exportarlos a Roma, haciendo constar que para ello se ha

<sup>1876</sup> MAIER ALLENDE, Jorge, p.107.

<sup>1877</sup> MAIER, ALLENDE, 2003, p.120.



tenido presente la Real Cédula en que el Consejo inserta y manda observar la Instrucción formada por nuestra academia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos que se encontraran en el reino, concretamente en el artículo 2º, al establecer que serán dueños de todos los monumentos descubiertos los que lo hallasen con sus heredades y casas o lo descubran a su costa y por su industria, con sola la carga de dar parte y noticia circunstanciada a la Academia por medio de su secretario. Mediante el Oficio de 23 de julio de 1806 sería solicitado que fueran devueltos los objetos descubiertos y depositados en la casa del alcalde de Pozo y Sal a su legítimo dueño. En el Oficio de 6 de agosto de 1806 se comunicaba que en el caso de presentarse algún aficionado a las antigüedades se le hiciera a los monumentos que conserve en la casa del Alcalde, con previo descubrimiento del descubridor y bajo la gratificación o precio que se convengan mutuamente<sup>1878</sup>. Se plantearía por el propio Pedro Ceballos que mientras la Real Academia pudiera resolver el caso, se expidiera una Orden por lo que se prohibiera, como en el caso de las pinturas, la extracción de antigüedades. La solicitud sería atendida, por lo que por Real Orden de 25 de junio de 1806 sería prohibida la extracción de objetos fuera del Reino, por lo que se subsanaba, aunque no en la práctica, sobre la cuestión de la libre disposición de los bienes arqueológicos que estuviesen en el ámbito del dominio privado, que no había sido observado en la Real Cédula de 1803.

#### **3.4.4. Novísima Recopilación**

La norma va a quedar vigente durante toda la primera mitad del siglo XIX, quedando insertada en la Novísima Recopilación como ley 3º, título 20, Libro 8º, en 1805, quedando en vigencia hasta la aparición del Código Civil en 1889, apareciendo aún en una recopilación legislativa de 1930, quedando después en el más absoluto olvido, siendo mencionada en la Cédula del Consejo Real del 2 de octubre de 1818, reiterándose todavía su obligatoriedad por una Real Orden de 6 de junio de 1865.

### **4. La gestación de una normativa sobre el tráfico de obras de arte en el ámbito del dominio privado.**

#### **4.1. Un crecientemente coleccionismo de obras de arte en el ámbito de los particulares.**

El esbozo del coleccionismo de antigüedades en la España ilustrada nos permite abordar el problema jurídico que va a ir cuajando en torno a la producción de un sistema normativo, a la hora de delimitar el derecho de disposición y gozo que por parte de sus propietarios va a tener sobre estos bienes adquiridos y cuál va a ser el verdadero papel del Estado a la hora de intervenir en este tráfico comercial. La adquisición de obras de artes por los particulares va a ser un hecho durante todo el siglo XVIII, afición que queda

---

<sup>1878</sup>CEBRIAN FERNANDEZ, Rosario *Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, 1748-1845, Catálogo e Índices*, Alicante, 2002.

reflejado en los textos de los propios contemporáneos, como sería el caso del ilustrado Ramón Cabrera en su obra *Distribución* (1793), al afirmar como *el carácter del espíritu de nuestro tiempo entra a ser parte constitutiva el cuidado de hacer colecciones de quanto se puede recoger y conservar de los pasados siglos*. A ello se une el hecho de la creación de múltiples galerías privadas, aludido por el propio Ramón Carreras en 1799: *Estímase, en fin, las Artes por los que hacen Colecciones de Pinturas, Estatuas, Baxos-Relieves (...) Tales colecciones, formadas con discernimiento, y dispuestas con método en Galerías o Gabinetes, si se franquea la puerta a los Profesores, y a los aficionados que deseen instruirse, vienen a ser unas Escuelas de buen gusto*. La posesión de colecciones de cuadros en el ámbito domestico se convierte en un de consideración social como fue en el caso de las adquisición de las obras de Murillo, como aparece en el texto de Jovellanos las Reflexiones y conjeturas sobre el boceto original del cuadro llamado “la familia”, citando como *digno de elogios algunos eruditos que saben apreciar las obras que poseen, y procuran perpetuarlas en sus casas para acreditar el buen gusto de sus ascendientes en adquirirlas, el suyo y el de sus sucesores en conservarlas, dando la debida estimación al digno paysano que tanto honró la patria con sus obras*<sup>1879</sup>.

A falta de un exhaustivo estudio del coleccionismo español del siglo XVIII, se han ido publicando algunos interesantes del ámbito local, del que resaltamos el estudiado últimamente en el caso sevillano por el profesor Teodoro Falcón que puede servir de ejemplo del comercio que se estaba desarrollando en otras ciudades españolas. En el ámbito hispalense el tráfico comercial de bienes artísticos siguió estrechamente vinculado a las clases sociales privilegiadas: la nobleza, el alto clero y miembros de la clase media-alta, que desempeñaban importantes cargos en la administración o mantenían relaciones comerciales con Hispanoamérica y con Flandes. Solo en algunos casos, especialmente a fines de siglo, las grandes colecciones, eran un conjunto variopinto, integrado por piezas de arqueologías, numismática, biblioteca, gabinete de Historia Natural, rico mobiliario y gran número de joyas<sup>1880</sup>. Los inventarios de los bienes post mortem nos proporciona una exhaustiva información sobre los bienes que poseían las grande familias nobiliarias<sup>1881</sup>, de entres los analizados cabe mencionar las de Domingo de Urbizu, caballero de la Orden de Alcántara, donde figuraban 165 cuadros; la de Jerónimo Ortíz de Sandoval y Zúñiga, Conde de Mejorada, realizada tras su muerte, el 17 de septiembre de 1721, con 73 cuadros; la del pintor Domingo Martínez, realizada

<sup>1879</sup> ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés, *Pensamiento artístico español del siglo XVIII. De Antonio Palomino a Francisco de Goya*, Museo Nacional del Prado, Colección Universitaria, Madrid, 2001, pp.332-333.

<sup>1880</sup> FALCON MÁRQUEZ, Teodoro, “El coleccionismo en Sevilla en el siglo XVIII”, en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M<sup>a</sup> DOLORES, Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en la España de los siglos XVIII y XIX, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp.45-64.

<sup>1881</sup> SANZ, M.J. y DABRIO, M.T. “Inventarios artísticos sevillanos del siglo XVIII. Relación de obras artísticas”, *Archivo Hispalense*, n.176, Diputación, Sevilla, 1974, pp.102-106.

por su propia viuda, Mariana de Espinosa, integrada por varios millares de piezas, entre las que se incluían más de 700 pinturas; la de los Duques de Medinaceli, las pertenecientes al Duque de Alba, que durante este siglo se incrementaría su colección, heredando un amplio número de obras que posteriormente serían depositadas en el Palacio de Liria. Finalmente, en el último tercio del siglo XVIII el propio Antonio Ponz citaría entre las familias aristocráticas sevillanas poseedoras de amplias colecciones de bienes la del Conde de Aguila (+1784), que gracias al inventario efectuado tras su muerte, entre el 3 de febrero y 31 de marzo de 1784 se conoce la extensa relación de obras que reunió, entre las que incluirían 243 pinturas; el del Marqués de Loreto (1725-1803), que contaría con una colección de 160 cuadros<sup>1882</sup>, y el de Francisco de Bruna y Ahumada (1719-1807), poseedor de una de las colecciones de este siglo, de la que constaba más de 150 cuadros, que sería citado por el propio Moratín como comparable con lo mejor del Vaticano<sup>1883</sup>.

Sin embargo, en el ambiente ilustrado ya comienza a ver una preocupación para que las obras de arte española no saliesen nunca de España. El ilustrado valenciano Gregorio Mayans en su *Arte de Pintar*, que había poseído una importante colección de cuadros, lamentaría el expolio de algunas obras maestras que se estaba efectuando en este momento: *Pero la verdad es que aviendo faltado los imitadores de los que renovaron la pintura, i los discípulos destos, se fue enfriando la afición a este arte (...) i entretando los estrangeros, conociendo la utilidad i el valor de las pinturas, se van llevando las que en otro tiempo vinieron de Italia i de Flandes; i la que mejor se pintaron en España*<sup>1884</sup>. Sabemos que algunos personajes como Bernardo Iriarte (1735-1814), quien desempeñó un gran número de cargos políticos y administrativos en la Secretaría de Estado, siendo nombrado en 1792 viceprotector de la Real Academia de San Fernando, llegando a ostentar el cargo de ministro del Real y Supremo Consejo y Cámara de Indias, evitó la salida de algunas obras del Reino, e incluso hizo desde su posición para que se reintegrara algunas piezas que habían salido en el extranjero, llegando a convencer a su amigo Nicolás Azara para que trajese a España la colección de escultura clásica que había formado en Roma y tenía depositada en el Palacio de España en aquella ciudad<sup>1885</sup>. Además el ilustrado español siempre defendería que las obras de arte debían de mantenerse en sus

---

<sup>1882</sup> FALCON MARQUEZ. T. “El patrimonio artístico del I marqués de Loreto (1687-1772), y de la familia del Campo”, *Laboratorio de Arte*, núm.19, Universidad de Sevilla, 2006, pp.287-302.

<sup>1883</sup> ROMERO MURUBE, J., *Francisco de Bruna y Ahumada*, Ayuntamiento, Sevilla, 1965.

<sup>1884</sup> MAYANS Y SICAR, Gregorio, *Arte de pintar*, en *Obras Completas*, V, Ensayos y Varia, Ayuntamiento de Oliva, 1986, p.251.

<sup>1885</sup> JORDAN DE URRIES Y DE LA COLINA, “Azara, coleccionista de antigüedades, y la Galería de estatuas de la Real Casa del Labrador en Aranjuez”, *Reales Sitios, Revista del Patrimonio Nacional*, XL, 156, 2003, p.69; JORDAN DE URRIES “El diplomático José Nicolás de Azara, protector de las Bellas Artes y de las letras”, *Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar*, LXXXI, 2000, pp.61-87.

lugares de orígenes, como había expuesto Quincey cuando se expolió algunas piezas artísticas en Italia con la invasión francesa. Consiguió convencer al duque de Medinaceli para que reintegrara a la Casa Ducal de Santiesteban los cuadros de Giordano para devolverlos al lugar en que fueron pintados, e incluso se negó a comprar las tablas de Juan de Juanes del retablo mayor de la parroquia de San Esteban de Salamanca, que finalmente adquiriría Carlos IV, para que no perdieran su ubicación original. Sin embargo, paradójicamente cuando en 1802 es jubilado anticipadamente como Ministro al caer en desgracia, se pondría en venta una de las colecciones privadas más importante de estos años a través de una subasta pública que podía leerse en las páginas del Diario de Madrid. La galería Iriarte apenas sobrevivió algunos años más, ya que a su muerte serían sacado de España, a lo que sus herederos seguirían vendiendo sin ningún tipo de limitación en los primeros decenios del siglo XIX<sup>1886</sup>. El caso de Iriarte no sería desgraciadamente excepcional en el ámbito del coleccionismo privado, sino que como ya señala Gaya Nuño *las colecciones españolas de fines del siglo XVIII estaban predestinadas a emigrar*<sup>1887</sup>. De esta forma durante este periodo se va a producir la venta de amplias obras de Murillo en el extranjero: Así en 1729, el embajador inglés en Madrid, Stanhope se llevaría a Londres los Murillos que integrarían la colección del Duque de Rotland; en 1736, la condesa de Verrie adquiere cuadros de Murillo y se los lega a su amante, el conde de Lassay; en 1760, Mr. Blackwoord se llevaría a Londres la Sagrada Familia de Murillo; en 1768, en Londres se vende el Niño Mendigo, de Murillo; en 1772, en París se vende la colección del Duque de Choiseul, por lo que el Ermitage de San Petesburgo adquiere dos Murillos.<sup>1888</sup> Uno de los casos más chirriantes estudiado por Antigüedad sería la venta de la colección de pinturas del Duque de Arcos a un comerciante inglés, Duval, que la había aceptado por la adquisición de unos diamantes, que conseguiría venderlos en Londres a un buen precio<sup>1889</sup>.

<sup>1886</sup> JORDAN DE URRÍES Y DE LA COLINA, Javier “El coleccionismo del ilustrado Bernardo Iriarte” *Goya*, Núm. 319-320, pp.259-280. Durante las décadas de los años 20 y 30, la viuda de Iriarte vendería al pintor José Madrazo más de medio centenar de cuadros, en concreto 54 de la antigua colección de la Galería Iriarte. A la muerte de la viuda, probablemente en Bremen, los restos de la colección serían vendidos en Londres y París serían vendidos por su sobrina María del Rosario Lázaro y Sáenz de Tejada. Se tiene constancia que a principio de 1827 fueron subastados en Londres, tres cuadros procedentes de la colección madrileña de Iriarte. Entre 1841 y 1842 se podrían a la venta los cuadros más importantes en Bonnefons de Lavialle, en París, en la primera, celebrada del 15 al 17 de febrero de 1841 se ofertarían más de 40 cuadros y en la segunda venta del 21 de enero de 1842 cincuenta lotes de pinturas.

<sup>1887</sup> GAYA NUÑO, J.A. *La pintura española fuera de España (Historia y Catálogo)*, Madrid, 1958, p.15.

<sup>1888</sup> BENITEZ DE LUGO Y GUILLEN, Félix, “La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales”, *Patrimonio Cultural y Derecho*, 11, 2007, p.12.

<sup>1889</sup> ANTIGÜEDAD, M<sup>o</sup> Dolores, 1994, p.391.

#### **4.2. Las Reales Órdenes del 5 de octubre de 1779 y 16 de octubre de 1779, prohibiendo la exportación de bienes de interés histórico y artístico y antigüedades.**

Ante esta perspectiva desde la Academia de Bellas Artes se va pedir al Rey que limite la exportación de obras de arte. La idea partiría del escultor Felipe de Castro escribiría las conocidas como Adiciones al Estatuto, de las que generaría el llamado Estatuto de 1751. En el número 14 pedía al Rey que se impidiese vender al extranjero todas las obras de arte que se hallaban en la Península, por los *quelas cosas excelentes y antiguas así de pintura como de escultura en ninguna manera se dejase sacar de Madrid... así S.M. con decreto público lo puede prohibir en esta Corte y en las aduanas salidas del reyno*. Unos añadidos al Estatuto de 1751, conocido con el título de Miscelaneos prácticamente reproducen la petición de Felipe de Castro, en la que se suplicaba que el Monarca prohibiera *con rigurosas penas, a exemplo de las demás naciones, la salida de sus dominios a toda especie de obra de algunas de estas facultades, o sus anejas*. Curiosamente Felipe de Castro defendería que se debía de facilitar la entrada de obras de arte a España, franqueándolas de toda tasación. Manuel Silvestre al definir el término Contrabando alude al tráfico ilegal de bienes artísticos: *Lo son los lienzos pintados, como ordinarios, y está prohibida su introducción en estos Reinos por Real Orden de 14 de julio de 1753, no habiendo otra que la derogue, y sea posterior, de que no he tenido noticia*<sup>1890</sup>. La Real Orden sería enviada a los Corregidores y Justicias del Reino, para que remitan todas las piezas de antigüedad que se hallasen, *a Madrid, y á la casa establecida de Geografía, como eran las Estatuas de mármol, bronce, ú otro metal, rotas, o enteras, Pavimentos Mosaicos, ó de otra especie, herramientas, ó instrumentos de madera, piedra ó suela, monedas ó lapidas, y lo que de ellas se diga por Escritos, tradiciones, ó Noticias*. Los Justicias se lo comunicarían a los Intendentes, y éstos debían de *pagar el coste del descubrimiento de cuenta de la Real Hacienda, y dar el aviso con su remisión á S.M. por la vía reservada, o por el Ministro que corre en la dirección de casa de Geografía, y según se les tiene efectivo, para que el citado Decreto tenga efectos*. Nuevamente los académicos pidieron al rey en 1761 que *en conformidad de lo que se practicaba en Nápoles, Roma y todos los pueblos cultos, se prohibieron bajo graves penas que se sacaran fuera del Reino las pinturas y esculturas de artífices famosos difuntos*. La petición que había sido enviada el 7 de marzo, quince días después, **el 22 de marzo de 1761** se publicaría un edicto disponiéndose que las pinturas y esculturas de artistas famosos no podían venderse a los países extranjeros, por los que aquellos que fueran confiscados en las fronteras, serían considerados como bienes de contrabandos. El proceso sancionador que se va a aplicar en el caso del tráfico ilegal de los bienes históricos-artísticos es un reflejo del instaurado en virtud de la Real Instrucción del 22 de julio 1760, por el *quese manda distribuir por quartas partes iguales, de las cuales una es para Su*

---

<sup>1890</sup> SILVESTRE MARTINEZ, Manuel *Librería de Jueces, utilísima y universal para abogados, Alcalde Mayores y Ordinarios*, Tomo IV, Imprenta de la Viuda de Eliseo Sánchez, Madrid, 1768, p.156.



*Majestad, otra para el Señor Superintendente de su Real Hacienda, otra para el Juez que sentenciare, y otra para el Denunciante; o no haviendole, para la Ronda aprendiente*<sup>1891</sup>.

Unos años más tarde, el Conde de Floridablanca a petición del Monarca Carlos III se promulgaría **la Real Orden del 5 de octubre de 1779**, redactado tal vez por Iriarte, prohibiéndose *que desde hoy en adelante se saquen del reyno para los extraños pinturas de manos de autores que ya no viven....* La Real Orden sería enviada al Asistente de Sevilla Francisco Antonio Domezain, a raíz de el gran número de cuadros de Murillo que en este momento se estaba adquiriendo en el mercado hispalense: *Ha llegado a noticia del Rei N. S. que algunos Extrangeros compran en Sevilla todas las pinturas que pueden adquirir de Bartolomé Murillo y de otros célebres pintores, para extraherlas fuera del Reino, descubierta o subrepticamente, contra lo mandado por S. M. contra el particular en vista del inveterado y pernicioso abuso que se experimentaba de sacar de España los estimables Quadros originales que poseía la Nación.* La Orden va claramente dirigida al Asistente de la ciudad, para *queindague quienes son los sujetos que piensan enajenar los Quadros de Murillo y otros autores de crédito (...).* Se establece una sanción a los compradores fraudulentos *bajo la pena de competente multa pecuniaria y de embargo de las propias pinturas.* La carta enviada al Asistente tomaría fuerza de ley como precisa en los siguientes términos: *Y como S.M. ha resuelto sea general en todos sus Reinos esta providencia, quiere que V.S. observe puntualmente en la provincia del que es Intendente el contenido de dicha carta, cuidando que no se extraigan para países extrangeros cuadros algunos de manos de Pintores ya no existentes, tomando las precauciones allí indicadas, y las demás que le dicten su zelo y vigilancia, y dando el correspondiente aviso por mi medio siempre que llegue a verificarse haber V.S. logrando frustrar la enajenación de algunas Pinturas destinadas a extraherse, o impedir la extracción misma de ella.* La Real Orden esta citada por Antonio Ponz en su *Viaje a España* (Tomo 9, carta 9, pp.843-844)<sup>1892</sup>.

La medida quedaría completada con la **Real Orden Circular del 16 de octubre de 1779**, en la que se establecía la prohibición de exportar libros, pinturas, manuscritos y antigüedades sin una real orden<sup>1893</sup>. Se tiene noticia de la aplicación de estas órdenes con el decomiso en Ágreda (Soria) de una *Magdalena*, de Murillo, que conducía un arriero siguiendo las órdenes de un tal

<sup>1891</sup> SILVESTRE MARTINEZ, Manuel *Librería de Jueces, utilísima y universal para abogados, Alcalde Mayores y Ordinarios*, Tomo I, Capítulo IV, *en que se hace exposición de los Reales Decretos, Cédulas, Ordenanzas y Pragmáticas, publicadas hasta el año 1763, de Justicia, Gobierno y Política, y modo de proceder en causas de contrabando (...)*, p.237.

<sup>1892</sup> “La exportación de obras de arte en tiempo de Carlos III” *Arte Español*, Cuarto Trimestre de 1927, pp.301-302. Esta orden sería leída reiteradamente en el Congreso a principio del siglo XIX en los debates que se fueron produciendo en torno a la exportación de las obras de arte, tanto en el Senado el 20 de octubre de 1906, en boca del académico Aviles, o posteriormente en el Congreso por Puig i Cadafalch en 1907.

<sup>1893</sup> TORTOSA, T, y G. MORA “La actuación de la Real Academia de la Historia sobre el patrimonio arqueológico: Ruinas y antigüedades” *Archivo Español de Arqueología*, 69, nº 173-174, Madrid, 1996, pp.191-217.



Pedro Casamayor para entregarla en Bayona a don Pedro Miramón. La pintura sería enviada a la Academia de San Fernando, aplicándose el proceso sancionador del momento, por lo que los denunciados fueron recompensados con una prima en metálico equivalente a la cuarta parte de los bienes confiscados<sup>1894</sup>. Sin embargo, la salida de obras españolas al extranjero siguió su curso, como lo demuestra la venta de la colección del gaditano Sebastián Martínez, amigo de Goya, quien a su muerte sería adquirida en el mercado extranjero, entre los que se encontraban obras de Murillo y Velázquez. En 1807 J.B. Lebrun intentó permutar algunos cuadros de escuelas españolas por otros de su propiedad, por lo que se instaría la intervención de la Real Academia de San Fernando, notificándose que los Carmelitas descalzos le habían vendido dos cuadros de la Sacristía, el uno de la Concepción de Murillo y otro un San Pedro de Alcántara de Claudio Coello, e incluso se descubrió que el propio Lebrun recorría las tiendas de algunos prebendados o tratantes de cuadros. Por ello la propia Real Academia dictaría una recomendación del protector Cevallos para que hiciese uso de la Real Orden de 5 de octubre de 1779, embargando todas las obras que fueran demostradas compradas por Lebrun<sup>1895</sup>. A pesar de estas disposiciones sobre exportación dada por Floridablanca dio lugar a una mayor vigilancia, los marchantes siguieron realizando amplios negocios, como lo refleja el conflicto que mantuvo el pintor Manuel Acevedo con el francés Baltasar Angelot, quien compraba cuadros y los sacaba del país sirviéndose del equipaje del embajador de Francia, no siendo registrado en la aduana. Unos después a Antonio Ponz se le encarga que revisara la compra de veinte cuadros que había realizado el Barón Frick, que iba a llevar a su patria, Sajonia, dictaminando su legalidad al no estar contemplada en ninguna de estas disposiciones<sup>1896</sup>.

Curiosamente en el capítulo de la importación, la postura de la Real Academia de San Fernando sería más permisiva, como fue el caso de la introducción de pinturas y escultura por parte del sacerdote francés José Delpech para formar un museo, solicitando que fuera exento de pagar el treinta y tres por ciento de estimación que pedía la administración de Aduanas y Alcabalas, al mismo tiempo que se pedía que en el caso de que no se vendiese todas las obras, se las pudiese llevar sin ningún tipo de impedimento. La Real Academia instó al Gobierno de Godoy el 2 de noviembre de 1796 a facilitar la entrada de este tipo de obras, y que permitiese su salida sin ningún tipo de gravamen, incluso de autores vivos, ya que ayudaba a enriquecer el conocimiento de artistas de otros países. Se conoce la instancia del francés Juan Pujou que en 1799 pide permiso para introducir en España algunas obras

---

<sup>1894</sup> GAYA NUÑO, 1958, p.15.

<sup>1895</sup> NAVARRETE, Esperanza, *La Academia de Bellas Artes y la pintura en la primera mitad del siglo XIX*, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1999, pp.431-432.

<sup>1896</sup> ANTIGÜEDAD, María Dolores, "Coleccionismo y protección del patrimonio: aproximación de los antecedentes legislativos sobre prohibición de exportar obras de arte". *Actas del X Congreso del CEHA Los Clasicismos en el arte español*, UNED, 1994, p.391 y ss.

artísticas, por lo que se solicitó que la Real Academia de San Fernando acudiese a la aduana para tomar nota de las obras que iban a ser introducidas en el territorio nacional, extendiéndose un certificado en caso de que su propietario decidiera volverlas a sacar<sup>1897</sup>.

En 1801 con motivo de otra denuncia de extracción de cuadros hacia Francia por parte de la Academia, el gobierno de Carlos IV renovaría la prohibición del comercio exterior de las obras de arte. Como apunta López Trujillo en las causas de estas medidas reiterativas hay que buscarlas también en que *el Estado se entrometía con la propiedad particular, algo a que los dueños de la obra de arte no estaban acostumbrados y que, por supuesto, no tenían las más mínimas ganas de aceptar*<sup>1898</sup>. Se estaba abriendo la vía inicial de considerar un auténtico derecho de la propiedad privada del bien histórico-artístico, que llegaría a su culminación en el liberalismo decimonónico. La sed por la pintura española en el mercado extranjero había aumentado, anotando Gaya Nuño como ejemplos de marchantes extranjeros en nuestro país, las misiones que llegarían desde Francia, dirigida por Lebrun, y sobre todo la inglesa, donde el pintor Wallis se dedicaría en 1807 a adquirir todo tipo de bienes pictóricos de la escuela española, creando un verdadero negocio de compra y venta hacia el mercado británico. Es muy ejemplificador el Informe que Iriarte va a enviar al Ministro del Interior en 1801 sobre los cuadros que Juan de Aguirre quería vender a Carlos IV, donde hace mención sobre la compra fraudulenta que en estos años estaba realizando Luciano Bonaparte, hermano de Napoleón: *Como Aguirre trafica en pinturas calificándolas de originales y executadas por autores de mayor nota y tasándola a su arbitrio exorbitantemente se hicieron precisos arte y disimulo... Busqué un pretexto de introducirme en su casa acompañado del Pintor de Cámara... Tratábase de ver los cuadros, más ninguno estaba a la vista, pues, me dixo, los había escondido porque no había querido se le antojasen a un emisario (el pintor Letiers) del Embajador de Francia, Luciano Bonaparte, a quien no ha muchos días vendió setenta pinturas, en ocho mil duros (...) Pude rodear la conversación de modo que vino a hablarme de la tabla del Descendimiento de Pedro Campaña. Dixome, al significarle yo existía aquella célebre Pintura en la Iglesia de Santa Cruz, que era original y preferible la que él poseía y tenía en Torrejón de Ardoz, que lo había adquirido en el convento de dominicos de aquella ciudad de Sevilla adonde estaba oculta e ignorada (...) Poco después de la llegada de Luciano Bonaparte a Madrid comprendí, por uno de los de su séquito, se proponía adquirir para enviarla a Francia, la cual se me figuró una especie de saqueo de las reliquias de las Bellas Artes que la República se proponía hacer en España en santa paz, al uso del executado en guerra abierta primero en Flandes y Holanda y luego en Italia. Veo que Luciano comprueba y efectúa de hecho su programa...*<sup>1899</sup>. Luciano Bonaparte contaba en España con un agente llamado Guillaumen Letiers, un pintor de

<sup>1897</sup> NAVARRETE, Esperanza, 1999, p.436.

<sup>1898</sup> LOPEZ TRUJILLO, Miguel Ángel, Patrimonio. La lucha por los bienes culturales españoles (1500-1939), Madrid, 2006, p.122.

<sup>1899</sup> SANCHEZ CANTON, La venta de cuadros en 1801: La concepción de Aranjuez y el Descendimiento de Montpellier, en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 1933, pp.165-166.

historia que había venido a Madrid en su séquito, quien ayudará a adquirir una amplia colección que llevaría a Francia posteriormente<sup>1900</sup>. No podemos pensar que el caso de Luciano Bonaparte va a ser una excepción a comienzo del siglo XIX, Godoy, Duque de Alcudia y favorito de la reina María Luisa había reunido en su palacio de Buenavista una colección de pinturas de primer orden provenientes de los conventos de Sevilla<sup>1901</sup>.

#### **4.3. Un caso de confiscación de los bienes artísticos como medida limitadora del tráfico de obras de arte: El destino de la colección de Manuel Godoy.**

La caída en desgracia de Manuel Godoy va a propiciar la idea de crear un museo público a raíz de la confiscación de los bienes muebles e inmuebles por Real Decreto, por lo que pasaban a ser propiedad de la Corona, con el objeto de que fuesen saqueado la valiosa colección de pinturas, esculturas, grabados, platería, porcelanas, tapices, mapas y libros raros que había ido adquiriendo a lo largo de su vida pública y que le habían hecho uno de los coleccionistas más importantes de la Ilustración española<sup>1902</sup>. Desgraciadamente una gran parte de estas obras se perdieron, bien por la posterior ocupación francesa y su consiguiente saqueo, bien porque el resto de las obras conservadas fueron subastadas posteriormente. Este hecho se pudo evitar si hubiera sido una realidad la creación de un Museo o Galería de Pintura que estuviera formada por dichas obras, con una concepción pública en cuanto a que pudieran ser visitadas por la población. Serían Manuel Nápoli, restaurador real de las pinturas en el Palacio Real del Buen Retiro, y Pedro Cevallos, Primer Secretario de Estado de Carlos IV de 1800 a 1808, quienes planificaron el proyecto museológico, que se insertaba dentro de las ideas ilustradas que se habían puesto de moda en toda Europa. Isadora Rose-de-Viejo ha publicado los informes en el que se reflejan el carácter moderno del proyecto museístico. En el Informe de 25 de septiembre de 1808 de Manuel Nápoli que dirige a Pedro Cevallos subraya la pérdida que supondría para el patrimonio de la Nación la desmembración de la colección de obras artísticas que habían pertenecido a Godoy: *será verdad q. esta preciosa Colección se desmiembre en unas circunstancias en donde no se sacara de ella ni la décima parte de su valor, valor q. muy poco podrá sufragar las urgencias del Estado y en un tiempo en q. la Nación necesita conservar estos objetos de Bellas Artes para la formación de Pinturas que carece y no tiene*<sup>1903</sup>. Al mismo tiempo cabe resaltar la idea ilustrada

---

<sup>1900</sup> SANCHEZ CANTON, Mas sobre Luciano Bonaparte, coleccionista, en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 1933, pp.261-262.

<sup>1901</sup> PEREZ DE GUZMAN, Juan. Las colecciones de cuadros del Príncipe de la Paz, en *La España Moderna*, T.140, 1900, p.105.

<sup>1902</sup> ROSE DE VIEJO, Isadora, *Manuel Godoy: patrón de las Artes y coleccionista*. Tesis Doctoral. Ed. Universidad Complutense, 1983, 2 Volúmenes.

<sup>1903</sup> ROSE DE VIEJO, Isadora El Museo Godoyiano: Una oportunidad perdida en RAMOS SANTANA, Alberto; ROMERO FERRER, Alberto (Eds.), *Liberty, Liberté, Libertad El Mundo hispánico en la era de las revoluciones*, Universidad de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, 2010, pp.454-455.

española de concebir de conservar una colección que había sido de dominio privado, que ha pasado a formar parte del Estado, por lo que en ella se cuaja un verdadero interés nacional, favorables a los intereses de los súbditos de la Corona, como aparece insertada en el texto: *Señor si la Nación Española pierde estos momentos tan favorables y q. a tan poca costa forme una colección de Pinturas (...), terminando este informe subrayando la utilidad pública del proyecto: Espero que V.E. tome parte en estos mis sentimientos, y obre a conseguir, y proteger una Causa tan justa, como interesante a la Nación Española, y tan deseada por todo aficionado a estas Artes (...).* Por su parte, Pedro Cevallos trasladaría la recomendación dada por Napoli a Antonio Arias Mon y Velarde, Decano del Consejo y Gobernador Supremo de Castilla, el 28 de septiembre de 1808, en el que nuevamente aparece el espíritu de interés nacional que podía representar la colección de pinturas confiscada por el Estado: *D Manuel Godoy señaladamente ha reunido una bellísima colección de originales; no sería extraño que haia conseguido muchos tomados de nuestros Palacios Ries así como ha logrado sacar de los conventos y particulares; y sería un dolor que la Nación quedase privada en todo o en parte de esta Riqueza que una vez perdida no puede recuperarse con facilidad, y que tanto interesa al lustre de las artes en España, desgracia que será inevitable si los quadros se ponen en venta*<sup>1904</sup>. Prosigue el Informe recomendando que se depositaran en el Palacio de Buenavista y que fuesen inventariados por los primeros pintores de Cámara, Francisco de Goya y Mariano Maella, y subraya que fuesen custodiados como *un Patrimonio de la Nación, que quando se restablezca la tranquilidad pueda servir de principio de una excelente Galería que sea de utilidad nacional para las artes y nuestros artistas*. En un primer momento el Informe de Ceballos tuvo una consecuencia favorable, ya que el propio Arias Mon dio orden de detener *la venta de aquellas preciosidades dignas de toda atención*, a lo que se unió la promulgación por parte de la Junta Central de un Decreto ordenando *la suspensión de la venta de los efectos de pintura, escultura, grabados y libros del Príncipe de la Paz, pues muchas de las preciosidades que hay... podrán servir... para algún establecimiento nacional en obsequio de las artes*. El 6 de noviembre de 1808 la Real Academia de San Fernando se comprometía hacerse cargo de la colección de Godoy. Sin embargo, el plan quedaría truncado cuando durante los primeros días de diciembre de 1812, las tropas francesas entrarían en la capital española, por lo que comenzaría la pérdida de este legado patrimonial, por lo que cuando en septiembre de 1813 se hizo el inventario definitivo, después de haber sido expulsado al invasor francés, solo habían quedado 381 del total de 1100 que había en 1808<sup>1905</sup>.

<sup>1904</sup> ROSE DE VIEJO, Isadora, 2011, pp.457-458.

<sup>1905</sup> ROSE DE VIEJO, Isadora, 2011, p.458.

### **5. El principio de ornato como deber del ciudadano en el ámbito del régimen de la policía urbana en la España de la Ilustración: Las ordenanzas de ornato como instrumento jurídico de intervención estatal.**

Durante el Antiguo Régimen se desarrolla ampliamente la doctrina político-jurídica de la policía, enunciadas por Heinrich Gottlob Von Justi como aquellas medidas tendentes a mantener el orden y la disciplina que reina entre los ciudadanos que la componen. Ha nacido el llamado Cameralismo, al amparo de los consejos o cámaras reales, de ahí su denominación, de las monarquías centroeuropeas para la gestión política de sus reinos, especialmente en la Prusia de Federico Guillermo I y Federico II el Grande, que tiene como objetivo primordial la búsqueda del bienestar común, del logro de la felicidad humana, lo que sociopolíticamente se denominará el bien común. Como consecuencia de esto se derriba el hecho de que durante el Antiguo Régimen el campo de acción de la Policía, en su acepción estatal, resulta muy extenso e incorpora en todas aquellas materias que se consideran propias de la acción del Estado absoluto, y entre ellas las relativas a Justicia, Hacienda, Guerra o Paz. A ellos se va a ir abriendo camino la denominada Policía Urbanística, que será la encargada de regular la actividad propia del ciudadano y la responsable de crear aquellas infraestructuras urbanas que establezcan la mejora cualitativa de la vida en la ciudad, por lo que nacerán los reglamentos y ordenanzas de Policía Urbana correspondientes<sup>1906</sup>. En el caso de España, se puede afirmar que durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, los tratadistas del estudio de las Ciencias de Policía son numerosos, pero prácticamente no aportan ninguna novedad sobre el europeo, como fueron el caso de José Olmeda y León, Tomás de Valeriola Riambau y Ramón Lázaro de Dou, aunque solamente repiten las tesis ya tratadas en Europa<sup>1907</sup>. Sin embargo, a partir de la Ilustración española se va a ir dando ya los primeros pasos de una verdadera policía urbanística<sup>1908</sup>, especialmente en el régimen municipal, siendo la imposición del orden público, por un lado, y la implantación de la mejora de las condiciones de vida de los vecinos, los pilares fundamentales del nuevo marco político urbano. José de Olmeda y León en *Elementos del Derecho Público de la Paz y de la Guerra* recoge esta nueva visión: *El objeto de la Policía, no solo debe ser el material de la limpieza, adorno y hermosura de los Pueblos, sino también el formal del sosiego, quietud de los ciudadanos, y buen orden de la Sociedad*. Las mejoras de vida, pilar de la doctrina política-jurídica del Cameralismo, como búsqueda de la felicidad

---

<sup>1906</sup> ANGUITA CANTERO, Ricardo “La concepción teórica de la idea de la ciudad en la ilustración española: La Policía urbana y los nuevos fundamentos del orden, comodidad y aspecto público” *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, Tomo XXVII; 1996, pp.106-109.

<sup>1907</sup> JORDANA DE POZAS, Luis “Los cultivadores españoles de la Ciencia de la Policía”, *Revista de Estudios de la Vida Local*, n.º.17, 1944, pp.701-720.

<sup>1908</sup> ANGUITA CANTERO, Ricardo, *Ordenanza y Policía Urbana. Los orígenes de la Reglamentación edificatoria en España (1750-1900)*. Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Granada, 1997, pp.112-128.



de los ciudadanos, se irá cumplimentando con la aparición de una amplia normativa urbana de la que hasta este momento había carecido. Alumbrados, alcantarillados, limpieza, y hermoso de las calles serán los principales contenidos de esta nueva regulación. Serán las llamadas Ordenanzas las que se conviertan en el texto normativo por excelencia, siendo las destinadas al aspecto público de las calles la que se convierten en una verdadera novedad en la regulación española, aunque contamos con algunos antecedentes durante la etapa de los Austrias, pero de carácter muy escaso<sup>1909</sup>.

Las ordenanzas de ornato público serán los instrumentos que la Administración va a utilizar en la búsqueda de un incipiente urbanismo que a veces no se corresponden con los intereses privados. La ideología estética urbana promovida por los ilustrados españoles se contrapondría con el ideal romántico de las ciudades históricas que irían desarrollándose en los años posteriores. Se inserta para ello una amplia reglamentación centrada primordialmente en la reglamentación de la composición arquitectónica, uniforme para toda la calle, la fijación del límite de altura para todas las edificaciones. Las Instrucciones de los Corregidores será el otro pilar normativo de la nueva realidad urbanística, donde exhorta a los gobiernos municipales a emprender mejoras en las ciudades. Ya durante el siglo XVI se había puesto en marcha una política urbanística con los criterios emergentes de embellecimiento y ornato, encaminadas a mejorar y acentuar la higiene y la habilitación de sus centros urbanos con un claro sentido modernizador. A través de un gran número de ordenanzas se buscó disponer de ciertas normas y de la aplicación de tímidos recursos de regulación espacial que redundaran en beneficio de una imagen más saludable y ordenada de la ciudad. Se buscaba ofrecer una imagen de la ciudad de mayor modernidad y prestigio de cara a la ciudadanía, como ocurrió en la ciudad Imperial y Primada de España, Toledo. La idea de crear una urbe moderna en el ámbito renacentista español iría acompañada de la construcción de espacios públicos donde concurriese los poderes políticos y religiosos del momento, por lo que no se desestimó derribar edificios de propiedad privada que obstaculizaban la delimitación de plazas públicas, como fue el caso del proyecto de la plaza del Ayuntamiento<sup>1910</sup>.

<sup>1909</sup> ANGUITA CANTERO, Ricardo, 1996, pp.113-115.

<sup>1910</sup> GORDO, Luis J. *Concurrencia de poderes en los espacios públicos en el Renacimiento* *Anales de Historia de Arte*, Universidad Complutense de Madrid, Volumen 12, Madrid, 2002, pp.66-69. Los edificios que allí se levantaban era el granero y once pares de casas del Cabildo de la Catedral, junto al Ayuntamiento, y la escribanía y casas de los escribanos, frente a la fachada occidental de la Catedral. Tales inmuebles obligarían a retrasar el inicio de las reformas urbanas en la Plaza hasta catorce años. Para poder iniciar las obras, las autoridades civiles y eclesiásticas hicieron de satisfacer, de modo conjunto, el coste que suponía el derribo y la tasación de dichos edificios. Por fin, en la primavera de 1554, con el impulso conjunto del Cardenal Juan Martínez Silíceo y el Ayuntamiento de Toledo, comienzan a establecerse las condiciones necesarias para la obra. La demolición de estos edificios supuso ciertos problemas a la hora de realizar la tasación, y especialmente reacios se mostraron los escribanos con el derribo y traslado de su sede (...) Sin embargo, gracias a su tenacidad consiguieron ser reubicados no lejos de su asentamiento tradicional, ya que obtuvieron como nueva sede las



Felipe II organizó las *Relaciones topográficas e históricas* por sugerencia de su cronista Ambrosio de Morales, en 1575, como una medida de protección de los monumentos antiguos españoles, que será la primera relación de monumentos a cargo del Estado. Junto a esta importante disposición, se tiene noticia de que a nivel municipal se dictaron algunas ordenanzas, como la que redacta Ignacio de Hermosillas, al estudiar las ruinas de Talavera la vieja, la única actualmente conocida, aunque como apunta Maier, se dictarían otras semejantes en otros municipios españoles: *Ordenamos y mandamos, que por quanto en esta dicha villa había una ordenanza antigua, la qual se guardaba y al presente guarda, la qual hablan de razón de la conservación de los edificios antiguos que hay en dicha villa, i se van por algunos vecinos de ella deshaciendo, ordenamos que de a qui adelante ningún vecino de esta dicha villa ni de fuera de ella sea osado a romper ni desbaratar ningún edificio de los edificios de los antiguos que estovieren morados sobre la tierra, so pena de seiscientos maravedís, la mitad para la cámara de su señoría ilustrísima, y la otra mitad para los propios de dicha villa, i questo se inquiera en la pesquisa secreta, para que los culpables sean castigados*<sup>1911</sup>. El consejero del rey Felipe III, Castillo de Bovadilla en su célebre libro *Política para corregidores y señores de vasallos*, ya enunciaría una serie de medidas sobre conservación de inmuebles en el ámbito urbano. El capítulo V del número III empieza con la declaración: *Una de las cosas que más ennoblece a los pueblos son los suntuosos y magníficos edificios, cuya memoria, aun después de sus ruinas, permanecen en los futuros siglos y hace a los fabricantes de ellos dignos de eterna fama, por lo que consigna instrucciones a los Corregidores para que incesantemente se preocupen de que los pueblos reparen y hagan obras públicas. En su capítulo V referente a los ayuntamientos ya da potestad expropiatoria al corregidor: Pueden también los Corregidores, para las obras públicas, en especial de iglesias, compeler a los dueños que vendan sus solares y casas, y si no quieren hacerlo pueden así para las dichas obras como para otro edificio, o ensanche de ellas o de calle o plaza pública, o para hermostrar la ciudad, tomar y derribar las tales casas y heredades ajenas de poco valor, tasándolas y pagándolas luego si fuere posible, y si no al fiado. Con el mismo fin precisa que los Corregidores pueden prohibir que los mejoramientos hechos en los edificios de la ciudad, así de pinturas como de adorno, y en otra manera no se quiten ni rayen, si de así se ha de seguir de formidat a la ciudad, sino que se cumpla con pagar la estimación... Pueden compeler a los hidalgos y otros exentos seglares que contribuyan con sus haciendas para hacer y reparar los muros, fuentes, puentes, puertas, caminos, calles y calzadas*<sup>1912</sup>. La primera disposición urbanística en la España Borbónica sería la Ordenanza de Intendentes Corregidores, otorgada durante el reinado de Fernando VI, mediante Real Instrucción de 13 de octubre de 1749, aunque recogida nuevamente en la Instrucción de Corregidores dada

---

bóvedas inferiores del nuevo edificio consistorial, instalándose en esa parte las nuevas escribanías a fines del siglo XVI.

<sup>1911</sup> HERMOSILLA, Ignacio de Noticias de las ruinas de Talavera, la vieja leída en la Academia de 2 de julio de 1762, *Memorias de la Real Academia de la Historia*, I, 1796, pp.361-362.

<sup>1912</sup> Las citas están tomadas de MARTIN RETORTILLO, C. "La riqueza artística municipal y la reforma interior de las poblaciones" *Revista de Estudios de la Vida Local*, n.40, 1948, pp.481-491.

por Carlos III, según **Real Cédula de 5 de mayo de 1788**: *Prevendrán los Corregidores a las Justicias de las ciudades, villas y lugares de su provincia, se esmeren en su limpieza, ornato, igualdad y empedrados de las calles, y que no permitan desproporción y desigualdad en las fábricas que se hicieran de nuevo; y muy particularmente atenderán a que no se deforme el aspecto público, con especialidad en las ciudades y villas populosas; y que por lo mismo, si algún edificio amenazase ruina, obliguen a sus dueño a que la reparen dentro del término que les señalare correspondiente; y no lo haciendo, lo mandaren executar a su costa; procurando también, que en ocasión de obras y casas nuevas, o derribos de las antiguas, queden mas anchas y derechas las calles, y plazuelas; disponiendo igualmente, que no queriendo los dueños reedificar los arruinados en sus solares, se les obligue a su venta o tasación, para que el comprador lo execute*<sup>1913</sup>.

El Madrid de Carlos III puede ser un ejemplo claro de la nueva realidad urbana desde el punto de vista de la intervención administrativa, donde los intereses privados quedan sometidos a los intereses generales<sup>1914</sup>. Una amplia normativa urbana se va a ir desarrollando donde cabe insertar las que en 1761 se dictan para el empedrado y limpieza de las calles de Madrid por el arquitecto Francisco Sabatini, donde se preveían la construcción de conductos para evacuar<sup>1915</sup>, así como las ordenanzas que se van a promulgar sobre prevención de incendios, como el redactados por Juan de Villanueva y publicadas el 11 de octubre de 1790 para la ciudad de Madrid, motivado directamente por el incendio de la Plaza Mayor. La creación de los cementerios públicos en extramuros se convirtió en uno de los objetivos de la política urbanística española, especialmente durante el reinado de Carlos III, y refleja la introducción del igualitarismo después de la muerte proscribiendo el excesivo lujo de los panteones privados<sup>1916</sup>. A nivel provincial cabe destacar *las*

<sup>1913</sup> MARTINEZ, Librería de Jueces, Utilísima y Universal, para alcaldes, corregidores, Intendentes, Prelados (...) Tomo III, Capítulo II, en *que sustancialmente, y por su orden se exponen los 146 artículos de la Real Ordenanza de 13 de octubre de 1749, expedida en Buen Retiro por la Magestad del Señor Don Fernando VI (...)*, Imprenta de la Viuda de Eliseo Sánchez, 1768, pp.86-87.

<sup>1914</sup> CERVERA VERA, L. "Normas para las mejoras urbanas en el Madrid de Carlos III y algunas disposiciones precedentes" en AA.VV. *Carlos III Alcalde de Madrid*, Madrid, 1988, pp.235-264.

<sup>1915</sup> CERVERA VERA, L. "Francisco Sabatini y sus normas para el saneamiento de Madrid", *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, XI, 1975, pp.137-189; MUÑOZ JIMENEZ, J.M., Nuevos documentos sobre saneamiento y alumbrado público de Madrid en el siglo XVIII; Las reglas para construir cloacas, de Francisco Sabatini y las Instrucciones para el servicio de la Iluminación en *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, XXII, 1985, pp.525-535; MOLEON GAVILANES, P. Problemas de salubridad pública. El vientre de Madrid, en AA.VV. *Carlos III, Alcalde de Madrid*, Madrid, 1988, pp.527-544.

<sup>1916</sup> CALATRAVA ESCOBAR, Juan Antonio "El debate sobre la ubicación de los cementerios en la España de las luces: la contribución de Benito Bails" *Espacio, Tiempo y Forma Serie, VII, Historia del Arte*, 1991, nº 4. Durante esta etapa se proyecta una amplia normativa desde el Informe de la Real Academia de la Historia de 1783 *Sobre la disciplina eclesiástica antigua y moderna relativas al lugar de las sepulturas*, la promulgación de la Real Cédula de 3 de abril de 1787, incluida en la Novísima Recopilación y la Real Orden del 26 de abril de 1804. La normativa aparece en Reflexiones sobre la legislación de España en cuanto al uso de sepulturas, que presentó a la Academia de la Historia el año de 1781 en *Obras publicadas e inéditas de Don Gaspar Melchor de Jovellanos*, Madrid, 1956, vol. I, pp.477-479, o El Informe

*Ordenanzas Municipales de 1792 de Cádiz* puede ser una de las más conocidas de la legislación borbónica<sup>1917</sup>. La Exposición de Motivos comienza con un de la acción que realiza la Administración sobre lo público: *El cuidado, con quien atiende el Gobierno, y el Magistrado todo el asunto de policía, le obliga a aplicar su atención a uno de los ramos más propios de su inspección, por la íntima conexión que tiene con la comodidad de los vecinos, la seguridad de sus posesiones, y el aspecto y ornato público.* A continuación plantea la calidad que tiene los bienes inmuebles de la ciudad gaditana: *Las casas de esta Ciudad logran ciertas ventajas, que han sido objeto de la celebración de muchos profesores (...) A estas ventajas, que son notorias, es lástima que se hayan unido algunos defectos, producido por la ignorancia de la Arquitectura, y por haberse confundido los derechos del particular, y del público. Lo primero produce un absoluto abandono de las reglas del Arte, y lo segundo ha hecho que cada vecino se juzgue solo, y sin dependencia, ni relación alguna con los demás, a quienes muchas veces perjudica, ya quitándole la luz, o impidiéndole la ventilación, etc.* Se impone al mismo tiempo el sentido el interés general sobre los derechos de los propietarios en sus inmuebles como refleja la propia Exposición: (...) *Los respetables derecho de propiedad no sustraen a los que intentan labrar algún edificio de alguna dependencia, que en ciertos puntos debe de tener al Magistrado, como depositario en esta parte de los derechos del público. Es peculiar y propio del dueño de la finca la repartición y distribución del terreno; lo es igualmente el mayor o menor adorno que quiera poner, como también todo los demás que respecta a la comodidad, economía y utilidad; pero no es arbitro de faltar a las reglas de Arquitectura; poner adornos caprichosos, cortar la rectitud de la calle; impedir la ventilación (que tanto contribuya a la salud pública); y desfigurar el aspecto con adornos extravagantes, que impongan a la Nación la nota de ignorante, y poco instruida.* Y añade: (...) *por cuya razón deben contenerse los dueños dentro de los límites de sus respectivos deberes.* El legislador divide en cuatro grupos las ordenanzas que debe de cumplir todo particular, siendo la 1ª la correspondiente a Orden de Policía, donde en el artículo 3º se inserta la Orden de 25 de noviembre de 1777, en el que se reservaba el conocimiento de los planos y alzados la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y las Cuarta están dedicados a los de aspecto y ornatos público, donde se imprime como debe de estar ornamentado las fachadas de los edificios públicos y privados.

La mayor preocupación que el Cabildo de la ciudad de Granada dedica la segunda mitad del siglo XVIII al aspecto público de las ciudades será a través de la regulación de la actividad edificatoria privada. Estas leyes, recogidas en las Instrucciones de Corregidores, supondrán la complejización del control municipal sobre la edificación y el aspecto público de la ciudad. **La**

---

sobre la disciplina eclesiástica antigua y moderna relativa al lugar de las sepulturas, en Vol. V, pp.75-105.

<sup>1917</sup> ANGUITA CANTERO, Ricardo “La imposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre el Ayuntamiento del Antiguo Régimen: Las ordenanzas de Cádiz de 1792 y la pugna ilustrada por la titulación de maestro de obras” *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, NªXXVI, 1995, pp.411-422; ANGUITA CANTERO, Ricardo, *Ordenanza y Policía Urbana. Los orígenes de la Reglamentación edificatoria en España (1750-1900)*, Universidad de Granada, Granada, 1997, pp.157-163.

primera de ella sería **la Ordenanza de Intendentes Corregidores dada en Real Instrucción de Fernando VI el 13 de octubre de 1749, siendo recogida posteriormente por Real Cédula de Carlos III el 5 de mayo de 1788:** *Prevendrán los Corregidores á las Justicias de las ciudades, villas y lugares de su provincia, se esmeren en su limpieza, ornato, igualdad y empedrados de las calles, y que no permitan desproporción ni desigualdad en las fábricas que se hicieran de nuevo; y muy particularmente atenderán á que no se deforme el aspecto público, con especialidad en las ciudades y villas populosas; y que por lo mismo, si algún edificio amenazase ruina, obliguen a sus dueños a que la reparen dentro del término que les señalaren correspondientemente; y no lo haciendo, lo mandaren executar a su costa (...) disponiendo igualmente, que no queriendo los dueños reedificar las arruinadas en sus solares, se les obligue á su venta o tasación, para que el comprador lo execute...*<sup>1918</sup> En el caso de Granada, el estado de ruina que se hallaban numerosas casas era una cuestión que iba más allá del buen ornato de la ciudad al hacer peligrar la seguridad pública de sus vecinos, por lo que surgió un procedimiento de denuncia de los edificios considerados ruinosos por parte de los Alarifes de la Ciudad ante el Maestro Mayor de Obras, quien debía dictaminar al respecto. Se acordarían que junto a comisarios del Ayuntamiento, se reconocieran los edificios de la capital que estuviesen defectuosos por medio del Maestro Mayor y demás peritos que existieren, constituyéndose al mismo tiempo una Junta sobre Reconocimiento y Seguridad de Edificios, junta de carácter eventual que tendría el cometido de solucionar los problemas de edificios en peligro de hundimiento<sup>1919</sup>.

La culminación definitiva de la protección regia vendría con la creación de una Academia Artística que dirigiese los destinos de la vida cultural del país, especialmente en el ámbito estilístico. Durante todo el siglo XVIII se presentarían varios proyectos, desde que en 1726 F. Meléndez presentara el primero, a los que seguirían los de Olivieri en 1741 y el del propio Felipe V, quien en 1742 aprobará la creación de una academia, cuyos estatutos no serían ratificados hasta 1744. A pesar de ello, no sería hasta el reinado de Fernando VI quien le daría el impulso definitivo, al inaugurar la Real Academia de San Fernando el 12 de abril de 1752. En los primeros momentos de su creación la Academia no tuvo como objeto primordial la conservación y restauración de los edificios y obras de arte del país, ya que se dedicaría a organizar la práctica docente de las “Tres Nobles Artes” así como los profesores y miembros que debían constituirlos. Sería a partir de 1756 cuando comenzarían realmente a manifestar su preocupación por conservar y propagar las antigüedades y monumentos expuestos a desaparecer. Los primeros edificios que la Academia de San Fernando va a tener un verdadero interés de protección monumental serían la Alhambra y el Palacio de Carlos V en Granada, y el Palacio de

<sup>1918</sup> Aparece insertada en la Novísima Recopilación, Libro VII, título 32, Ley II.

<sup>1919</sup> ANGUIA CANTERO, Ricardo “Reglamentación urbana en Granada durante el Antiguo Régimen: De la ciudad cristiana a la ciudad ilustrada” *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, Departamento de Arte, Nº XXIV, 1993, pp.151-156.

Aranjuez, aunque no abordándose ningún tipo de intervención<sup>1920</sup>. Los primeros pasos de su posición administrativa como órganos regios aparecen reflejados en sus propios estatutos de 1752, por lo que siguiendo los estudios de Calvo Serraller entre sus ocupaciones contarían la regulación y el control de la enseñanza artística a través de una imposición de los gustos estéticos clasicistas, la dirección de la investigación historiográfica y sobre todo la responsabilidad directa en la conservación y restauración del patrimonio monumental<sup>1921</sup>. Posteriormente, en el año 1761, conseguirían del Rey que un arquitecto de la Academia supervisara las construcciones municipales, las iniciadas por los capítulos catedralicios y a los arquitectos propuestos. Una normativa posterior reforzaría el papel de la Academia, por lo que en 1768 se establecería que su Informe fuera imprescindible para realizar cualquier tipo de intervención en portadas, retablos o fuentes públicas. Posteriormente su papel sería reforzado con la promulgación de la Real Cédula de 1773 sobre los requisitos para otorgar licencias de construcción en las iglesias del Reino de Granada.

---

<sup>1920</sup> ALBAIZA BLANCA SOLER, Silvia “La Academia y la conservación del Patrimonio I” *Academia Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando*, segundo semestre de 1999, Número 89, pp.28-29.

<sup>1921</sup> CALVO SERRALLER, F. “Las academias artísticas en España” en N. PEVSNER: *Las academias de arte*, Madrid, 1982, pp. 209-239. ARRIBAS, F. *La protección al patrimonio artístico nacional en el siglo XVIII* en BSAA, VI (1939-1940), pp.237-238.



---

**CAPITULO III LA IRRUPCIÓN DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO LIBERAL EN EL SISTEMA NORMATIVO ESPAÑOL Y SU PROYECCIÓN EN LA TUTELA PÚBLICA DEL PATRIMONIO MONUMENTAL EN LA CONFIGURACIÓN INICIAL DEL ESTADO LIBERAL (1808-1835).**

---

Con la invasión napoleónica en el año 1808 se inicia en el ámbito hispano lo que podemos definir como la configuración inicial del Estado Liberal, que va ir limando el molde institucional de carácter absolutista que había caracterizado el periodo borbónico, a pesar de las reformas estructurales que los ministros ilustrados intentaron poner en marcha, muchos de los cuales quedaron en un simple proyecto frustrado. La España Josefina (1808-1812) podría haber significado un camino de esperanza a la modernidad institucional, y la entrada definitiva en la contemporaneidad, pero las circunstancias bélicas, la oposición de amplios sectores de la sociedad a todas las ideas llegada del exterior y la mala situación económica no pudieron delimitar definitivamente el modelo liberal. El regreso de Fernando VII a España despertó una expectación sin precedente en el ámbito del pueblo español, después haber sido expulsado el invasor francés, a lo que vendría acompañado de una esperanza de reconstrucción nacional que quedaría frustrada en el desarrollo de los acontecimientos de su reinado. Convulsiones políticas y sociales, enfrentamientos ideológicos entre tradicionalistas y liberales, llenaron los tres periodos que se han querido delimitar durante su reinado: el sexenio absolutista, el trienio constitucional y la década ominosa, por lo que se fue gestando en su figura uno de los personajes más negativo de la historia de España<sup>1922</sup>. El absolutismo regio que en principio presidió el espíritu del régimen político de la etapa de Fernando VII ha sido hoy cuestionado por algún sector de la historiografía contemporánea<sup>1923</sup>, más aun en la etapa final del reinado, en la década ominosa, donde se proyectaría una serie de reformas administrativas que lo sitúa como precedente del régimen liberal<sup>1924</sup>.

---

<sup>1922</sup> La imagen negativa de Fernando VII ha sido unánime en nuestra historiografía nacional. Ya Menéndez Pelayo dejaría constancia del momento : *El reinado de Fernando VII está todavía demasiado cerca de nosotros, para que sobre él haya podido recaer una sentencia firme y ejecutiva*

<sup>1923</sup> Alvarez Junco nos da una clave de inicio al señalar *como lo puede parecer, el restablecimiento del absolutismo presidido por Fernando VII, una restauración del Antiguo Régimen. Probablemente, era imposible. No había manera de evitar novedades, tras la devastación de creencias e instituciones causadas por el vendaval de los años anteriores.*

<sup>1924</sup> Alejandro Nieto niega el carácter absolutista del último periodo del reinado: *Los últimos años de Fernando VII en modo alguno puede ser calificado de absolutistas (...) tuvo un gobierno inequívocamente moderado formado por realistas ilustrados y afrancesados que se empeñaron en civilizar el régimen y abrir una salida para el futuro. A su sombra, se infiltraron en la Administración de manera tan silenciosa como eficaz, liberales de pura cepa, aunque ciertamente no exaltados, dispuestos a transigir con el realismo, y a preparar una transición no traumática. Bien es verdad que el ensayo no tuvo mucho éxito, pero la labor administrativa*



El advenimiento a la Regencia de María Cristina supuso un paso trascendental en la configuración administrativa del Estado, acercándose al modelo liberal, aunque sin terminar de cuajar definitivamente, al no poder superar algunos de los problemas endémicos del país, como habían sido la propia estructura social de índole absolutista o los problemas económicos que habían llevado la emancipación americana, a lo que se une en este momento las cruentas contiendas bélicas generada por la cuestión carlista.

La tutela pública del Patrimonio Monumental en la configuración inicial del Estado Liberal	Derecho de la propiedad en el sistema normativo español	Derecho de la propiedad en la configuración del sistema normativo del Patrimonio Monumental
Jose I	Irrupción del derecho de la propiedad privada. Transformación de la propiedad estamental.	Transformación de la propiedad monumental estamental
Fernando VII	Delimitación del derecho de la propiedad privada.	
Regencia de María Cristina	Triunfo del derecho de la propiedad privada	

Sería en la España Josefina cuando irrumpe definitivamente el derecho de uso y gozo de los objetos de los propietarios privados, una mera proyección del llamado código napoleónico, que va a ir dejando su impronta en las bases jurídicas e institucionales, cuyo exponente más relevante será la transformación de la propiedad estamental, reflejo de la ideología revolucionaria francesa, consagrado definitivamente en el ordenamiento napoleónico, por lo que los bienes de la Corona y el clero regular y secular se convertían en bienes nacionales, proceso que en el caso hispano no terminaría de cuajar. El derecho de la propiedad privada quedaría recogido ya en el ordenamiento constitucional gaditano y se iría recogiendo en una amplia gama normativa, vital para la consagración definitiva del Estado Liberal, al igual que se fueron adoptando las

---

*de aquel grupo de ilustrados fue continuado luego durante la regencia (...).* NIETO, Alejandro *Historia administrativa de la Regencia de María Cristina. Los primeros pasos del Estado Constitucional*, Barcelona, 2006, p.21.

Merece la pena insertar el análisis de Jean-Philippe Luis *Ignorada con demasiada frecuencia, la más larga de estas fases, la Década Ominosa, posee sin embargo un fuerte carácter (...)* tanto juristas como investigadores próximos han puesto de relieve un aspecto paradójico del último decenio del reinado de Fernando VII: la reforma del Estado (...) La década Ominosa no se reduce al fin de un mundo sino que participa en la construcción del Estado y de la sociedad liberal (...) el régimen es al mismo tiempo tiránico y voluntaria o involuntariamente reformador. LUIS, Jean-Philippe “La década ominosa (1823-1833), una etapa desconocida en la construcción de la España Contemporánea”, *Ayer*, 41, 2001, p.86.

primeras medidas de desvinculación estamental de la propiedad tanto en el estamento eclesiástico como nobiliario. A pesar de la imagen política negativa de Fernando VII se ha reivindicado desde muchos sectores historiográficos una relevancia en el plano cultural, y concretamente en el ámbito de la protección monumental, como es el caso de Maier, probablemente el que mejor ha analizado este periodo, quien reivindica la impronta que significó el periodo histórico de Fernando VII en el ámbito de la propiedad monumental, especialmente en la etapa de la Década Ominosa<sup>1925</sup>, muy alejado de la tesis sostenida por Miguel Ángel López Trujillo al dar una imagen desoladora del ambiente artístico: *Fernando VII tiene en su crédito el haber impulsado la gestación de una de las pinacotecas más importantes del mundo, pero muy poco más (...). Por lo demás España fue un erial cultural durante su reinado, y el patrimonio no fue una excepción. Los edificios históricos se arruinaban sin remedio en medio de la desidia y la crisis económica (...) Tampoco se libraba los edificios de la Corona (...)*<sup>1926</sup>. No cabe duda que durante su reinado se van a producir en el seno de la tutela pública del Patrimonio Monumental algunos hechos trascendentales que definirá el paso del Absolutismo al Liberalismo. Serían en el llamado Patrimonio Monumental Estamental donde encontramos, tanto en las colecciones regias, que van a dejar de ser un mero patrimonio personal del rey, a pesar de conservar su propiedad, al ser considerada como identidad de una nación que va naciendo entre convulsiones políticas y sociales (enfrentamientos entre liberales y absolutistas), pretensiones de un monarca absoluto, en sus primeros años de reinado, y reformista, en su periodo final, por lo que ha dejado solamente de ser el fundamento ideológico de una Monarquía, y las colecciones que habían pertenecidos a las órdenes religiosas, que van a ser protegidas al igual que las reales por ser identificadas con la identidad nacional. Al mismo tiempo se va a ir delimitando un derecho privado del Patrimonio Monumental, en un momento en que se van delimitando amplios mercados artísticos que va a suponer una pérdida patrimonial de incalculables consecuencias, al mismo tiempo, van a ir apareciendo en el seno de un grupo de eruditos los esbozos de un coleccionismo anticuarista, que les alejaba de simples pretensiones mercantilistas convirtiendo al bien de interés histórico y artístico en un bien inherente al propietario, por lo que la intervención pública será prácticamente en muchas ocasiones inexistente, más aún cuando el Estado Fernandino va a heredar una institucionalización administrativa desgastada por

<sup>1925</sup> Sin embargo, en algunos sectores de la cultura decimonónica, como fue el caso del pintor de Cámara, Pedro de Madrazo, la dedicaría unas palabras de elogios al Rey, en el prólogo del *Catálogo de los cuadros del Real Museo de Pinturas y Esculturas de S.M.*, rebatiendo las afirmaciones que el Murray's hand Book tachando al Monarca MADRAZO, Prólogo, p.VIII. *del godo más inestéticos de cuantos han fumado tabaco: Lejos pues, de haber prodigado a la memoria de Fernando VII homenajes inmerecidos, hemos sido excesivamente sobrios en el encomio; y es un gran desacato calificar de godo inestético a un Monarca que, aunque tal vez ignoró el nombre de la moderna ciencia especulativa de lo bello, hizo por el cultivo práctico del arte lo que muy pocos monarcas han hecho en este siglo (...).*

<sup>1926</sup> LOPEZ TRUJILLO, Miguel Ángel Patrimonio. *La lucha por los bienes culturales españoles (1500-1939)*. Trea, Madrid, 2006, p.159.

la guerra de la Independencia, aunque cabe indicar que durante la reforma administrativa producida en la etapa de la Década Ominosa se inicia una verdadera política de tutela monumental, por lo que potenciará a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que seguirán actuando como verdaderos órganos de inspección y tutela de Monumentos, que al mismo tiempo dependerá del Ministerio de Fomento y de la Secretaría de Estado, reivindicando una limitación en el campo de la exportación.

Durante la etapa de la minoría de edad de Isabel II se asiste a una revalorización del Patrimonio Monumental, unido a una sensación de abandono del mismo, como queda reflejado en la propia Gaceta de Madrid: *Ningún país hay tal vez en Europa en que más abunden los monumentos artísticos, los recuerdos de los siglos pasados, como en España; ninguno tampoco en que menos se aprecien, ni que yazcan en más profundo olvido. Aquí se ven los desmoronados torreones de un castillo gótico; allí los escombros de un antiguo palacio morisco; más allá una mezquita de los árabes elevando sus torres hasta las estrellas; y por último, una ciudad toda de recuerdos y antigüedades, Mérida, la llamada en tiempos remotos Emérita Augusta, callada como un sepulcro, olvidada como una mujer hermosa que un día brilló, y después de su muerte todos la olvidaron. Con sus desiertas calles, con sus edificios derruidos, es Mérida aún para el artista, para el hombre pensador, más todavía que Roma, que ha conservado bajo distintas formas su renombre, y que cual vieja vanidosa ha querido encubrir con el arrebol y los afeites las arrugas que imprimió el poder de los años en su frente. ¡Tantos restos de opulencia, y enteramente desconocidos! ¡Tantos monumentos artísticos, y hoy sumidos en el polvo del olvido!... Sin embargo, tal es el destino de las cosas: la generación que nace destruye lo que otra anterior edificó, y en su orgullo petulante y necio no quiere ver más que sus toscas obras, porque estas no pueden ser más que una fea copia, una imitación grosera al lado de las antiguas. La generación de 1837 no aprecia en lo general los restos de la raza primitiva, y llama con desprecio antiguallas a aquellas cosas que por sublimes no concibe su rudeza natural. De aquí su espíritu de destrucción; esa ignorancia profunda de nuestros restos magníficos de arquitectura; ese desprecio de las cosas que no se han visto. El que ha contemplado la catedral de Burgos o la de Sevilla, el que las admira, pasa por un pobre hombre sin gusto y sin criterio. Más esto solo a los ojos de los necios, de los estúpidos. Por fortuna ahora que las artes como la literatura han recibido tan provechoso impulso, ahora que la ilustración cunde, y la ignorancia muere, comienza sin duda la época de la regeneración artística (...)*<sup>1927</sup>.

Desde la perspectiva de los derechos patrimoniales del nuevo régimen liberal constitucionalista, se va a dar definir un sistema tutelar en base a dos realidades jurídicas: 1º) La configuración definitiva del Patrimonio Monumental Estamental en Bienes Nacionales, precedente de la delimitación de la categoría jurídica del Dominio Público que se irá delimitando en la

---

<sup>1927</sup> Gaceta de Madrid, Núm.967, 25/07/1837, p.4.

segunda mitad del siglo XIX. La nacionalización de los antiguos bienes históricos-artísticos pertenecientes a las órdenes conventuales no solamente va a producir una categoría de propiedad pública sino que incluso van a ser delimitado con una nueva identidad jurídica, fundamentado por el interés nacional que surge como verdadero valor público. El hecho de promulgar una normativa específica que protegiera y conservara este legado patrimonial adquirido va a ser ya un paso decisivo en orden a considerar estos bienes como parte de la identidad nacional, que no deben perderse, aunque desgraciadamente en la práctica en un gran número de casos ocurriría. Desde esta perspectiva, podemos afirmar sin ningún tipo de tapujos que el proceso desamortizador abrió el camino definitivo de un Derecho Público del Patrimonio Monumental, que aunque su aplicación fue muy limitada, debido a las circunstancias políticas y sociales del momento, no debemos desechar el esfuerzo que de una minoría de ilustrados intentarían realizar desde esta perspectiva. 2º) Durante la etapa de las Regencias, los bienes históricos-artísticos van a entrar en el seno de un mercado artístico, que empieza a expansionarse por el ansia de un coleccionismo privado, formado por anticuarios y , por lo que se puede afirmar por consiguiente que con la etapa de las regencias se articula la existencia de un verdadero Derecho Privado, sustentando ya en el ámbito civil del derecho de la propiedad privada, eje del ordenamiento jurídico del Estado Liberal, convirtiéndose en un derecho inherente al propietario. La construcción jurídica del interés general en el sistema normativo español limitando el derecho absoluto de la propiedad privada abrirá el camino de una funcionalidad pública del Patrimonio Monumental, fundamentada en la existencia de un interés nacional de una serie de bienes que tienen que ser exceptuadas del tráfico jurídico privado. Sería en las medidas desamortizadas de los bienes conventuales donde vamos a encontrar la articulación de unos límites administrativos de la propiedad privada, aunque de manera muy vaga, que se van a extender al patrimonio arqueológico, especialmente en el ámbito de la exportación, más aun en el caso de que fuera un mercado clandestino, sin la autorización estatal, por lo que se planteaba incluso un procedimiento sancionador, en que los bienes eran confiscados por las autoridades pertinentes.

## **1 Una nueva concepción del derecho de la propiedad en la configuración inicial del Estado Liberal: Capitalización y abolición del feudalismo como principios inspiradores del sistema normativo.**

### **1.1. La abolición del derecho de la propiedad estamental de carácter feudal en el sistema normativo español: Una encrucijada de contradicciones entre la modernidad y el absolutismo.**

Artola resume plenamente la nueva conceptualización del derecho de la propiedad privada en este momento, que pasa por la transformación jurídica de la propiedad estamental: *Solo la propiedad que es a la vez individual y libre quedó bajo la protección de las leyes y de toda forma de propiedad que no se ajustase a esta*

*definición debía convertirse a ella. No cumplían esta condición las propiedades vinculadas de los nobles. Aunque en cada momento existía un único propietario, el titular del mayorazgo no tenía capacidad de disponer de él a su muerte y no podía tampoco enajenarlo. La propiedad colectiva de las personas morales –La Iglesia, el municipio o el propio Estado– no cumplía con la primera de las condiciones. Todos estos bienes debían, por tanto, incorporarse al mercado. Los bienes vinculados se convirtieron en libres en manos de sus poseedores, en tanto la propiedad de las personas morales acabó en las manos de los particulares, a través de un proceso en dos etapas: nacionalización y enajenación*<sup>1928</sup>.

### **1.1.1. La abolición de los señoríos como punto de partida en el camino de la capitalización de los bienes de propiedad señorial.**

La abolición de los señoríos en España se convierte en uno de los episodios históricos más relevante a la hora de delimitar la historia social y económica en el ámbito contemporáneo<sup>1929</sup>. Como apunta Francisco J. Hernández Montalbán *las leyes de abolición de señoríos constituyen un aspecto esencial del proceso revolucionario por afectar al mecanismo básico de las relaciones sociales de producción fundamentales del régimen feudal*<sup>1930</sup>, aunque como precisa Alejandro Nieto a la hora de delimitar un régimen distinto para los señoríos territorios y solariegos dio origen a una confusión que daría lugar a infinidad de conflictos jurisdiccionales<sup>1931</sup>. La cuestión se iniciaría ya en el sistema normativo de la España Bonapartista. De hecho se contaba con el famoso precedente francés de la ley de 4 de agosto de 1789, el Decreto empezaba expresando su intención de *remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la monarquía española*, por lo que con tal fin, declaró que *desde ahora quedan incorporadas a la nación los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase que sean*<sup>1932</sup>. Y es

---

<sup>1928</sup> ARTOLA GALLEGO, M. *La burguesía revolucionaria 1808-1874*), tomo 5 de la Historia de España, Alianza Editorial, Madrid, 1990, p.112.

<sup>1929</sup> MOXÓ, Salvador de, *La disolución del régimen señorial en España*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Historia Moderna, Madrid, 1965.

<sup>1930</sup> HERNANDEZ MONTALBAN, F. *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Madrid, Biblioteca Nueva-Univ. Valencia, 1999.

<sup>1931</sup> En el artículo 5 se establecería un régimen distinto entre los señoríos jurisdiccionales y los señoríos territoriales al disponer que *los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no son aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la Nación, o de los en que no se hayan cumplido las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición*. El artículo 6º como derivación del anterior dispondría, que *Por lo mismo, los contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en razón de aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos u otros de esta especie celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contrato de particular a particular*. El problema radicaba en que muchos entendían que era impropia la distinción de señoríos, puesto que todos eran originariamente jurisdiccionales, por lo que en muchas ocasiones no se pudo resolver el problema

<sup>1932</sup> En el artículo 4 se estableció la prohibición de las relaciones sociales basada en el vasallaje, propia del sistema feudal, y se contemplaba el derecho del contrato libre, como nueva fórmula de organización jurídico-laboral: *Quedan abolidos los dictados de vasallos y vasallajes y las prestaciones, así reales como personales, que deban su origen a un título jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de la propiedad*. Al mismo tiempo se prohibían los *privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que*



que en el seno de la España Bonapartista se pondría las semillas de la posterior abolición de los señoríos jurisdiccionales con el Decreto de 4 de diciembre de 1808, por el que los derechos feudales quedarían abolidos en España (art.1º), quedando reflejadas en la Gaceta de Madrid de 20 de febrero de 1809, que con fines publicitarios eran las medidas que se querían imponer en España y que se habían puesto en marcha en Nápoles: *La feudalidad ha sido abolida, el Poder Judicial queda fuera del Poder Real, las leyes municipales sustituyen los caprichos de los terratenientes... los bienes territoriales de manos muertas han cesado de ser patrimonio de la pereza y se han convertido en minas inagotables de verdadera riqueza y prosperidad en manos de gran número de padres de familia (...)*<sup>1933</sup>.

El 1 de junio de 1811 se iba a proponer una de las medidas concretas para derribar los pilares básicos del régimen feudal, la abolición de los señoríos. Los diputados pertenecientes a la burguesía comienzan a defender la concepción de una capitalización de la tierra, fundamentando en el principios de la prescriptibilidad de la propiedad de la tierra, por lo que era consustancial de la propiedad burguesa la consideración de la tierra como una mercancía, por lo que algunos diputados como Castelló señalarían la necesidad de suprimir las vinculaciones como medida no perjudicial a los propietarios, que podrían vender o testar libremente, beneficiosa a la propia agricultura, por las inversiones que iban a realizar los adquirentes y el Estado, que vería incrementado la producción, independientemente cual fuera la identidad de su propietario, por lo que como subraya Francisco Hernández *el Estado había de ceder a los derechos individuales (...) la propiedad debía ser privada, no nacional; el Estado no le competía tanto el ejercicio de la propiedad como el hacer posible el ejercicio de ese derecho individual (...)*<sup>1934</sup>. Por fin, a iniciativa del diputado valenciano Lloret y Martí sería promulgado **el decreto de 6 de agosto de 1811** por lo que quedarían incorporados los señoríos jurisdiccionales a la Nación, quedando como propiedades particulares, por lo que los señoríos territoriales y solariegos quedaban desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular<sup>1935</sup>. En su artículo 1º se precisaba que desde este momento quedarían incorporados a la Nación, todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición que fuesen. En el fondo de la cuestión se estaba produciendo un doble hecho, que probablemente estaban en el espíritu de los constitucionalistas: llevar a cabo el desdoblamiento de los señoríos jurisdiccionales y preservar totalmente de la abolición el antiguo dominio solariego, bajo la nueva propiedad privada, que se subraya como apunta Salvador De Moxo de la lectura del artículo 5º al señalar que los

---

*tengan el mismo origen de señorío, como son los de pesca, caza, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, montes, y demás que quedan al libre uso de los pueblos.*

<sup>1933</sup> Gaceta de Madrid de 20 de febrero de 1809

<sup>1934</sup> HERNANDEZ MONTALBAN, Francisco J., 1999, pp.109-111.

<sup>1935</sup> Colección de los Decretos y Ordenes que han expedidos las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811, Cádiz Imprenta Real, 1811, pp.193-194.



señoríos territoriales y solariegos quedaban desde ahora en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no eran de aquellos que, por su naturaleza debían ser incorporados a la Nación, o de aquellos que no hubieran cumplidos las condiciones con que se les concedieron, resultado del tipo de adquisición<sup>1936</sup>, por lo que durante el Trienio Constitucional se intentaría resolver la cuestión con la promulgación de la **Ley de 3 de mayo de 1823**, con el objetivo *de evitar dudas en la inteligencia del Decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 6 de agosto de 1811* (art.1), pero que no tuvieron una resolución definitiva de la cuestión<sup>1937</sup>. Quizás en la intervención de Martínez de la Rosa, perteneciente a la burguesía moderada, en la sesión del 21 de abril de 1821 podamos apreciar la distinción que se empieza a dar entre lo que se entendía como señorío territorial y señorío jurisdiccional: *Si el espíritu de la legislación feudal y el influjo de aquellos siglos unieron en una misma persona los derechos jurisdiccionales y señoriales, y los territoriales y de dominio ¿es razón, es equidad, es justicia, que se contagien los unos por el contacto de los otros? El señor Quintana ha dicho, valiéndose de una metáfora poco exacta, que ambas especies de derechos son hijos de una ilegítima madre, cual es la feudalidad; más esto no es exacto. Pero sí lo es que según las costumbres de aquél tiempo, cuando hacían los reyes las enajenaciones, daban unidos los derechos de propiedad y de dominio con los feudales y de jurisdicción. Las Cortes extraordinarias decretaron sabiamente la abolición de los unos; pero los otros no debieron contaminarse con la simple unión, ni perder en manera alguna su propia índole y naturaleza. El Señor que adquirió un territorio o un solar, y juntamente el derecho de juzgar a los pueblos y de imponerles contribuciones, adquirió derechos diferentes, aunque confundidos en la donación y reunidos en la misma persona. Más los unos pertenece a la jurisdicción, y han debido abolirse; los otros a la clase de dominio particular, y deben respetarse. Con ello no solamente ganaba la burguesía moderada que estaba adquiriendo tierras de la nobleza, sino que ésta al distinguirse el carácter señorial del jurisdiccional de los señoríos, se veían defendidos al poder considerarse como propiedad particular y así podían ser conservadas.*

Con la llegada de la Década Ominosa el camino de la capitaliación del dominio señorial no queda totalmente truncado, ya que no fue abolido radicalmente el decreto del 6 de agosto de 1823, como un gran sector de la aristocracia solicitaría, por lo que tuvo que asumir la pérdida de los derechos jurisdiccionales sobre sus territorios, como prácticamente así quedaba dictaminada en la Real Cédula de 15 de agosto de 1823, aunque nuevamente se volvería a replantear el conflicto en la etapa de la Regencia de María Cristina, por lo que se intentaría salvar con la publicación de la ley de 26 de agosto de 1837, cuyo eje articulador estaría en la prestación de los títulos de dominio que fue ni más ni menos que el restablecimiento del Decreto de 1811, declarando *que desde ahora quedan incorporados a la nación los señoríos jurisdiccionales de*

---

<sup>1936</sup> MOXÓ, Salvador de, 1965, p.58.

<sup>1937</sup> Sobre el análisis de la ley de 3 de mayo de 1823, HERNÁNDEZ MONTALBÁN, Francisco J., 1999,

*cualquier clase que sean*, por lo que se convertían los anteriores señoríos territoriales y solariegos en propiedad particular, paradójicamente de quien antes había ostentado la condición de señor, por lo que desde esta perspectiva la nobleza no perdió en cierto modo el status económico que había tenido en el Antiguo Régimen, sino que incluso ganó posición, ya que sus antiguos vasallos se fueron convirtiendo en arrendatarios, por lo que tenían que pagar al antiguo señor una renta más alta que cuando ostentaban la condición de vasallos<sup>1938</sup>. En el artículo 4º se especificaba la nueva relación social de carácter contractual que enterraba definitivamente el régimen feudal: *Quedan abolidos los dictados de vasallos y vasallaje y las prestaciones, así reales, como personales, que deben su origen a un título jurisdiccional, a excepción de las que proceden del contrato libre en uso del sagrado derecho de la propiedad*, al que se uniría el artículo 7º al quedar *abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen del señorío, como son los de pesca, caza, hornos, molinos*(...).

La desvinculación de los mayorazgos se convierte en el otro pilar de transformación jurídica de la propiedad, que aunque no se llegó a nada concreto en las Cortes de Cádiz, si lo haría en la **ley de 11 de octubre de 1820**. En el artículo I se formula la desvinculación de los mayorazgos: *Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otras especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquier otra naturaleza, las cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres*. La situación cambiaría con la vuelta de Fernando VII en 1823, quien inmediatamente anuló la ley de 1820, con la **Cédula del 11 de marzo de 1824**, lo que supuso un revés económico a la baja nobleza, al cerrar la posibilidad de vender sus bienes territoriales con la consiguiente ganancia metálica, al tiempo que a la hora de restituir los bienes adquiridos en la legislación derogada, al tener que reintegrar el precio pagado, lo que provocó un amplio número de pleitos, que no podría aclararse hasta la **Ley de 6 de junio de 1835**, completándose con el **Decreto de 30 de agosto de 1836**, que en su artículo I restablecería en todo su fuerza y vigor el Decreto de Cortes de 27 de septiembre de 1820, aunque dejaría sin resolver los problemas concretos de las restituciones y los reintegros, por lo que no sería hasta la promulgación de la **Ley de 19 de agosto de 1841**, cuando definitivamente serían desvinculados los mayorazgos, que como apunta Tomás y Valiente, tendría una doble finalidad, por una parte, el rectificar por una parte la vigencia de la ley de 1820, que significaba la abolición de todo tipo de vinculaciones, y por otra resolvía

<sup>1938</sup> Alejandro Nieto apunta la *refinada hipocresía de todo esto, porque, a primera vista, perdía el señor su condición de tal y, con ella, la pomposa parafernalia de sus denominaciones y ritos medievales, que ningún valor real tenían; y a cambio, adquiriría lo que antes no era suyo, es decir, la propiedad de la tierra: un valor constante y sonante en el sistema capitalista liberal. Los señoríos nunca habían supuesto propiedad sino un derecho del señor sobre las personas que vivían en el territorio. Jurisdicción y propiedad eran dos conceptos totalmente distintos, cuyos titulares no coincidían ordinariamente*. Nieto, A., 1993, p.546.

los múltiples problemas suscitados por la eficacia de la ley desvinculadora durante el trienio y por la ulterior y contrapuesta eficacia de la Real Cédula de Fernando VII que había restablecido la institución propia del Antiguo Régimen. Los resultados fueron obvios, al liberalizar su propiedad agraria, la nobleza experimentó un proceso de aburguesamiento, por lo que aunque no fue privada directamente de la propiedad de la tierra, pero sí de la vinculación de las mismas, dejaría de constituir un bloque estamental<sup>1939</sup>.

La proclamación de la Constitución de Bayona el 6 de julio de 1809 supone un nuevo capítulo en el orden político y socioeconómico en España<sup>1940</sup>. Como apunta Juan C. Alli Aranguren la Constitución de Bayona reflejó las napoleónicas de los años VIII (1799), X (1802) y XII (1804), aunque aderazadas por algunas notas españolas, conforme a las actitudes del partido aragonés y de los afrancesados, siendo una síntesis de los conceptos autoritarios del emperador y de los deseos de la clase ilustrada española, siendo precedente, de la actitud constitucional del liberalismo doctrinario de los moderados. Se incluyó aunque vagamente los derechos individuales y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, como fue el caso de la inviolabilidad del domicilio (art.126), al mismo tiempo que supuso una ruptura con el orden estamental al ser abolidos los fideicomisos, mayorazgos o sustituciones que no produjeran rentas superiores a cinco mil pesos (art.136-138), incorporando los principios económicos del liberalismo como fueron la libertad de cultivo e industria (art.88) y el libre comercio (art.89)<sup>1941</sup>.

### **1.1.2. El camino de la capitalización del derecho estamental de la propiedad eclesiástica en la configuración inicial del Estado Liberal: Las medidas desamortizadoras.**

El proceso desamortizador ha sido uno de los acontecimientos históricos más ampliamente abordado por la historiografía española, probablemente por la significación política y social que representó para nuestro país<sup>1942</sup>. Aunque sería inviable tratar ampliamente en este estudio

---

<sup>1939</sup> TOMAS Y VALIENTE, Francisco Tomo XXXIV, 1991, p.161; CLAVERO, Bartolomé, *La propiedad considerada como capital: en los orígenes doctrinales del Derecho actual español*, pp.509-548.

<sup>1940</sup> Sobre la Constitución de Bayona existe una amplia bibliografía, MARTIRÉ, E. La Constitución de Bayona entre España y América, boe-cepc, 2000; MERCEDER RIBA, J. José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Estructura del Estado Español Bonapartista, Madrid, CSIC, 1983; MORODO, R. Reformismo y Regeneracionismo: el contexto ideológico y político de la Constitución de Bayona, *Revista de Estudios Políticos*, 83, 1994, pp.29-76;

<sup>1941</sup> ALLI ARANGUREN, Juan C.: El marco histórico e institucional de la Constitución de Bayona, *Revista Institucional de Estudios Vascos*, Cuaderno 4, 2009, p.210.

<sup>1942</sup> No es objeto de este estudio abordar el fenómeno desamortizador en el amplio sentido del término, por lo que solamente he considerado recoger algunos de los estudios generales más significativos que se han ido produciendo desde el mundo jurídico. Cabe mencionar el balance que realizaron Javier Infante Miguel-Motta y Eugenia Torijano de la Universidad de Salamanca sobre el fenómeno de la desamortización en la que deja constancia del poco interés que por la historiografía jurídica ha tenido la cuestión de la desamortización en el ámbito español: *el tema ha suscitado, con excepciones contadas, muy escaso interés hasta ahora entre*

podríamos plantear tres cuestiones básicas que por su trascendencia a la hora de abordar el análisis del Patrimonio Monumental es de suma importancia dejar claro. La primera cuestión que se plantea sería el significado semántico del término, en la que Martínez Alcubilla ya en 18 distinguiría entre desamortización y desvinculación, entendiendo por la primera *cuando los poseedores lo pierden, pasan al Estado, bajo cuyo dominio son bienes nacionales, el Estado lo vende á particulares, y al adquirirlos los compradores se hacen bienes libres*, entendiéndose por la segunda, *cuando los bienes se hacen libres en sus mismos poseedores, como sucede, v.gr., con los mayorazgos*<sup>1943</sup>. La segunda cuestión fue su significancia política y económica que en definitiva determinó el éxito y fracaso de la medida acordada por los gobiernos liberales de este momento. Joaquín Costa lo consideró como un cataclismo político y económico, ya que la revolución del siglo XIX solo se podría haber conseguido en base a una democratización de la tierra, por medio de un reparto de bienes nacionales procedentes de manos muertas entre los labradores en régimen de censo

---

*los estudiosos, inmersos en la tarea de contar y medir aquí y allá, con todo lujo de detalles, cómo se llevó a cabo la desamortización. Y este claro predominio de los silencios sobre las voces no es sólo propio de los tiempos presentes sino que se extiende al siglo pasado, cuando la organización administrativa se monta y actúa en Hª del derecho de la propiedad en España*, pp.374-380. Sin duda alguna son los estudios de TOMAS Y VALIENTE el que inicia el camino de un estudio histórico-jurídico del problema desamortizador, con su clásica obra el Marco jurídico de la desamortización, a los que habría que unir el artículo titulado Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento de síntesis, *Moneda y Crédito*, n.131, diciembre 1974, pp.95-160, que analiza exhaustivamente todo los más importantes estudios llevados a cabo hasta la fecha de la publicación del artículo. Posteriormente participaría en el congreso dedicado a la Desamortización con un acto de clausura cuyas reflexiones quedarían recogidas en sus actas tituladas Reflexiones finales: entre el balance, la crítica y las sugerencias, en *Desamortización y Hacienda Pública*, Ministerio de Agricultura y Alimentación-Instituto de Estudios Fiscales, 2 vols. Madrid, 1986. Gerardo Rueda en 1986 publicaría Bibliografía sobre el proceso desamortizador en España (tercera versión) en *Cuadernos de Investigación Histórica*, 9, pp.191-220. Otras obras que merecen ser citada, en la tónica de una selección limitada cabría mencionar a ALVAREZ-GENDÍN Y BLANCO, El despojo del Patrimonio Eclesiástico por las leyes desamortizadoras, *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, VIII, 1956, pp.117-168; ANTEQUERA, J.M. *La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones*, Madrid, 1885; BELLO VOCES, J. *La nacionalización de los bienes de la Iglesia: ocupación y administración (1845-1850)* en Estudios de la Hacienda: de Ensenada a Mon, Madrid, 1984, pp.35-51 CUENCA TORIBIO, J.M., *La iglesia española ante la revolución liberal*, Madrid, 1961.. GONZALEZ RUIZ Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX *Revista Española de Derecho Canónico* Tomo I, num.2, 1946, pp.383-424; PORRES MARTIN-CLETO, *La desamortización del siglo XIX en Toledo*, 1965; SIMON SEGURA, *La desamortización española del siglo XIX*, Madrid, 1973 y *Contribución al estudio de la desamortización en España. La desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid*. Madrid, 1969. TOMAS Y VALIENTE. F. *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona, 1977; La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen en la era isabelina y el sexenio revolucionario (1834-1874), tomo XXXIV, pp.143-193 de *la Historia de España de Menéndez y Pidal*.

<sup>1943</sup> ALCUBILLA, Diccionario de la Administración Española, Tomo V, Madrid, 1916, p.709.

enfiteútico<sup>1944</sup>. Menéndez y Pelayo sería uno de los intelectuales que más desacreditó las medidas desamortizadoras, que darían paso a las acusaciones de injusticia social e incluso de robo que había llevado a abordar los gobiernos de la Regencia. Unamuno lo tildaría como la verdadera revolución española<sup>1945</sup>.

Una última cuestión sería abordar si detrás de las medidas desamortizadoras nos encontramos con una revolución burguesa o una revolución meramente liberal. Sin duda alguna se ha mantenido la idea que detrás de la desamortización encontraríamos la verdadera revolución burguesa española, como sostendría Vicens Vives, que la definiría como la *medida política impuesta por la revolución burguesa*<sup>1946</sup> o posteriormente Tomás y Valiente que defendería *que todos los proyectos fracasaron y solo prosperó el más acorde con los intereses de la burguesía, que de este modo consumó su revolución a través de la desamortización*<sup>1947</sup>. Algunos como Miguel Artola lo achacarían a una burguesía revolucionaria e incluso A.M. Bernal ampliaría el término burgués a todos los nuevos propietarios que adquirieron bienes a raíz de las medidas desamortizadoras. Es relevante la tesis de G. Prieto Escudero quien defiende el triunfo de la burguesía como la clase beneficiaria de las desamortizaciones<sup>1948</sup>. Otros autores como Richard Herr pondría en duda si se trató de una revolución claramente burguesa, ya que los compradores beneficiarios de las subastas públicas fueron muy heterogéneos, por lo que diluiría claramente un sentido propiamente burgués del fenómeno<sup>1949</sup>. Incluso en las Jornadas que se celebraron sobre la desamortización en Santander en 1982 llegaría a afirmar que la hidalguía en un principio, especialmente en el periodo de Godoy, ocupó el sitio que históricamente se acostumbra a atribuir a la burguesía, por lo que defendía que el capitalismo inicial no llegó por el mero hecho de un reemplazo de clases, ya que siempre se ha identificado capitalismo con burguesía, erróneo desde su posición, por lo que apostaría por la existencia de una serie de clases o estamentos que van a beneficiarse del proceso<sup>1950</sup>. Germán Rueda en una misma línea insistiría que no se puede afirmar *automáticamente, sin más, que la*

---

<sup>1944</sup> COSTA, Joaquín *Colectivismo agrario en España*, Buenos Aires, 1944, p.156.

<sup>1945</sup> La expresión aparece insertada en su artículo titulado *Arquitectura Social*, publicado en *El Progreso*, Madrid, 16-1-1898. Ha sido recogido en UNAMUNO, Miguel *Obras Completas* Tomo XI, 1958, Vergara Ediciones, pp.57-58.

<sup>1946</sup> VICENS VIVES, Jaime *Historia de España y de América*, Barcelona, 1961, p.94.

<sup>1947</sup> TOMÁS Y VALIENTE, *El marco político de la desamortización en España*, p.162.

<sup>1948</sup> PRIETO ESCUDERO, G. “La burguesía, beneficiaria de las desamortizaciones” *Revista de Estudios Políticos*, 179, 1971, pp.65 y ss.

<sup>1949</sup> Al respecto recogemos las palabras de Herr: *No hay duda que la desamortización estuvo de acuerdo con la doctrina económica del liberalismo clásico, pero no por eso representó una revolución burguesa. Por el contrario, lo que demuestra el caso español es que el liberalismo clásico no tenía signo de clase social, sino que servía de provecho a cualquier grupo que pudiera beneficiarse del libre empleo de los factores de producción.* HERR, El significado de la desamortización en España, *Moneda y Crédito*, Madrid, diciembre de 1974, p.85.

<sup>1950</sup> HERR, Richard *Hidalguía y desamortización bajo Carlos IV*, en *Desamortización y Hacienda Pública*. Jornadas celebradas en 1982, Ministerio de Agricultura-Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, Tomo II, pp.463-478.



*desamortización consolidó la sociedad burguesa, al menos a corto plazo*<sup>1951</sup>. Fuera o no una revolución propiamente burguesa, siguiendo los modelos revolucionarios europeos, las medidas desamortizadoras eclesiásticas durante la etapa de la minoría de Isabel II fueron el paso definitivo a la hora de abordar el desmantelamiento del poder de la Iglesia en el ámbito de la vida política del reino, que comenzaría con la política regalista de los Borbones en el siglo XVIII y que culminaría en el Estado Liberal, como medida trascendental de desmontar uno de los pilares esenciales del aparato político-institucional del Antiguo Régimen, que también se llevaría a cabo con la Monarquía y la propia nobleza, pero utilizando otros derroteros. Sin embargo, con la Iglesia Católica se llegaría a más, ya que no solamente se abolió sus privilegios, sino que al mismo tiempo se quiso incorporar una gran parte de su Patrimonio, especialmente en el ámbito del mundo conventual, con la excusa de que el Gobierno tenía que recuperar fondos para poder suplir la deuda pública<sup>1952</sup>.

Probablemente en el fondo de la cuestión desamortizadora encontramos la ya clásica controversia entre el derecho de la propiedad privada y el interés general del Estado, que va a ser constante en el desarrollo del ordenamiento jurídico. Sin ninguna duda, podemos afirmar la identidad privada de una propiedad como la conventual, nacida desde los albores de la Edad Media, incrementando sus bienes en la etapa contrarreformista y llegando a convertirse en una de las fuentes de riquezas más importantes del país, teniendo la particularidad de concebirse con un carácter claramente amortizador, por lo que las propiedades siempre quedarían vinculada a un mismo dueño: las

<sup>1951</sup> En este sentido el historiador Germán Rueda afirma: *En la historiografía española nos encontramos a veces con términos que ni son precisos, ni reflejan acertadamente la realidad histórica de su época: es el caso de burguesía y labrador. En el fondo, lo que falla es el concepto que esconden los términos, cuyo contenido histórico, en buena parte, se desconoce por ello se recurre a las generalizaciones. Estas resultan cómodas a veces para escribir y para clasificar a los compradores de la desamortización, pero cuando queremos saber qué hay detrás de estos términos nos encontramos contradicciones y tal variedad de tipos que no se entiende muy bien cómo se puede meter en el mismo saco (...)* Incluso niega la existencia de una verdadera burguesía hasta la revolución de 1868: *Por otra parte, nos encontramos que la burguesía (entendida como burguesía de los negocios) era poco frecuente en la España de la primera mitad del siglo XIX y casi inexistente en extensas zonas.* RUEDA HERANZ, Germán *La desamortización en España: un balance (1766-1924)*, Arco/Libros S.L. Madrid, 1997, pp.64-65.

<sup>1952</sup> Alejandro Nieto critica las causas tradicionales que una gran parte de la historiografía española ha querido ver en el fenómeno de la desamortización eclesiástica, desde la ya clásica interpretación de considerarla como medio de financiación de la guerra civil, que en opinión del autor, fue *aceptada por muchos historiadores del siglo pasado, carece por completo de sentido ya que era irrealizable por simples motivos cronológicos (...)*, o también la ya repetida interpretación de la plétora frailuna, ya que como precisa Alejandro Nieto *en 1834, el número de miembros del clero secular había ya descendido notablemente en comparación con 1808 o 1820*, a lo que se añadía la causa del anticlericalismo manifiesto que vive la sociedad española en este momento, considerando siguiendo la tesis del autor, que esta interpretación no es sostenible, *que han seguido los historiadores del pasado, y mucho más sorprendentemente algunos contemporáneos: la desamortización no hizo sino legalizar un sentimiento popular que no toleraba ni a los frailes ni a su riqueza.* Otros autores como Fontana ven simplemente una sustitución de la propiedad del Antiguo Régimen por la propiedad burguesa participando en el proceso, tantos moderados como progresistas.



órdenes religiosas, y a su vez a la institución de la Iglesia. La paradoja que va a surgir en la etapa liberal es clara: si se concibe que la propiedad privada como el eje primordial de los derechos individuales del Estado Liberal, llegando incluso a su sacralización, por el que el Estado prácticamente no puede intervenir, cuáles fueron los fundamentos jurídicos por el que se llevaría a cabo la medida. En el fondo subyace la pretendida intervención estatal en bien a la utilidad pública, que se convertiría en el verdadero campo de batalla del legislador liberal, cambiabile entre las posturas más progresistas o más conservadoras. La cuestión residiría en el interrogante que formula Miguel Ángel Rubio García: *¿Hasta dónde el Estado por utilidad pública puede disponer de las propiedades privadas que posean título legítimo de la propiedad?*<sup>1953</sup>. En la propia Exposición de Motivos de la ley Mendizábal va justificar la desamortización aludiendo que el interés del Estado estaba por encima de cualquier otro, y en la defensa que realizó el 30 de mayo de 1837 del proyecto de ley para la dotación de culto y clero, intentaría argumentar que la medida se hacía en base a prevalecer los intereses del Estado sobre cualquier otros, aunque fueran bienes eclesiásticos. Al igual que posteriormente ocurriría con la expropiación forzosa, se articuló un proceso de indemnización clerical mediante el pago de una dotación económica para el sostenimiento del culto y del clero.

En el proceso desamortizador, comprendido entre los años 1809 y 1837, se pueden establecer tres fases fundamentales:

1º) La etapa bonapartista, con la promulgación del Decreto de 18 de agosto de 1809, por el que sería suprimida todas las Ordenes religiosa, mandando que se aplicara el beneficio a la extinción de la Deuda Pública.

2º) La política desamortizadora de las Cortes de Cádiz, que por Decreto de 13 de septiembre de 1813 serían declarados bienes nacionales los de los jesuitas y los de los conventos y monasterios suprimidos. Este decreto tendría poca aplicación, ya que con el restablecimiento del absolutismo de 1814, Fernando VII ordenaría la devolución a los conventos de sus bienes.

3º) Durante el Trienio Constitucional se establecería la legislación desamortizadora, especialmente el Decreto de 13 de septiembre de 1813, al que se le añadiría el Decreto de 1 de octubre de 1820 por el que serían suprimidos los monasterios monacales, reduciéndose el número de órdenes no suprimidas y aplicándose sus rentas al crédito público. Por su parte, la Ley de 11 de octubre de 1820, prohibiría a las iglesias, monasterios y demás comunidades

---

<sup>1953</sup> RUBIO GANDIA, Miguel Angel, *La obra del Gobierno de Mendizábal*, Método Ediciones, Granada, 1996, p.25.

eclesiásticas adquirir bienes algunos, raíces o muebles, por título alguno, sea lucrativo u oneroso (art.15)<sup>1954</sup>.

4º) Las distintas medidas desamortizadoras durante la etapa de las Regencias, a lo largo de varias fases: 1º) Durante el periodo de los ministros moderados de Martínez de la Rosa y del Conde de Toreno, se articulan las primeras medidas desamortizadora del periodo; 2º) Con el gobierno del ministro Mendizábal, que ocuparía el Ministerio desde el 14 de septiembre de 1835 hasta el 15 de mayo de 1836, que supondría un ataque sin precedente a las órdenes religiosas, especialmente con la promulgación del Decreto de 19 de febrero de 1836, por el que se declaraban en venta los bienes pertenecientes a las Corporaciones religiosas suprimidas; 3º) que se desarrollaría desde el triunfo de la revolución en agosto de 1836, hasta el final de la guerra carlista, que constituiría la culminación de todo el proceso legislativo anterior, con la promulgación del Decreto de 8 de marzo de 1836 sobre la supresión de los conventos y los Reales decretos de 29 de julio de 1837 por el que se declaraban la extinción de los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos, aplicando sus bienes a la extinción de la Deuda Pública, y convirtiendo en bienes nacionales las propiedades del clero secular y 4º) Bajo la Regencia del general Espartero, por la Ley del 2 de septiembre de 1841, que se pondrían a la venta todas las fincas, derechos y acciones del clero secular, consolidándose de esta manera el proceso desamortizador.

La consecuencia primordial de las medidas desamortizadoras fue sin duda alguna la nacionalización de los bienes del clero regular, que en cierta manera rompía el carácter sacralizador de la propiedad privada de la ideología liberal. Sin embargo, cabe precisar que el carácter *privado* de la propiedad conventual se distinguiría de la nueva *propiedad* nacida en los albores del Estado Liberal. La propiedad conventual era ante todo una propiedad estamental, vinculada al estamento, inamovible, externa al tráfico mercantil nacido del incipiente capitalismo, pero en el fondo improductiva en el nuevo sistema económico y financiero de los liberales, por lo que su adquisición no se debe de contemplar como una mera nacionalización de los bienes, sino que su adquisición por el Estado respondía a una transformación de su naturaleza jurídica, al convertir estas masas de propiedades estamentales en la nueva concepción de la propiedad privada, desvinculada a ningún estamento. De hecho fue lo que se realizó, ya que una vez que se incorporó a las manos del Estado, se pondría en venta en pública subasta, quedando abierta a su capitalización. Desde esta perspectiva, el interés general no tendría una primacía como mera utilidad pública, como en el caso de la expropiación forzosa, sino que simplemente se trataba de un cambio de posición jurídica de la propia propiedad privada. Desde las filas eclesiásticas, se iría delimitando una doctrina opositora a toda intervención estatal y a la defensa del carácter

<sup>1954</sup> TOMÁS Y VALIENTE, F., 1977, p.745.

sacro de la propiedad eclesiástica. Pedro de Inguanzo en su libro *El dominio sagrado de la Iglesia en sus bienes temporales* (Salamanca, 1820.1823), negó la capacidad legal del Estado para incautar las posesiones eclesiásticas adquiridas *con arreglo al derecho natural y divino*. Ya en 1840 Balmes se opondría abiertamente en su opúsculo *Observaciones sociales, políticas y económicas de los bienes del clero*, una crítica agria sobre los efectos de la desamortización, que lo pone en entredicho y la supuesta potestad del Estado sobre la propiedad eclesiástica.

## **1.2. La inclusión del derecho de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico: la configuración del Estado de los propietarios.**

### **1.2.1. El derecho absoluto de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico de la construcción inicial del Estado Liberal.**

El derecho absoluto de la propiedad privada va a irrumpir con fuerza en el camino de la construcción jurídica del Estado Liberal en España, y es que como puntualiza Alejandro Nieto como *en el entramado de objetivos e intereses inspiradores de la revolución liberal se encuentra en primer término, sin duda, la propiedad, completamente indispensable de la libertad (...) La propiedad proporciona un poder económico y también un poder social (...) Por si fuera poco, la propiedad asegura también un poder político desde el momento en que los propietarios pueden controlar electoralmente a los arrendatarios y a los obreros que ellos dependen (...)*. Ya el derecho de la propiedad privada va a merecer un trato preferente en la Constitución de 1812. El liberalismo gaditano consagra al derecho de la propiedad como un *derecho natural constitutivo de la propia sociedad civil, y hace del propietario el principal garante del orden social y de la existencia misma de la nación*, como podemos ver reflejada en las propias palabras de un liberal como Argüelles, al considerar que solamente un gran propietario *puede tomar un grande interés por el bien y felicidad de la patria a motivo que su arraigo en ella hace que aquél sea el suyo propio*<sup>1955</sup>, e incluso haciéndose eco de las tesis de Locke afirmaría en las Cortes de 1811 que la propiedad *es lo que más arraiga al hombre a su patria*<sup>1956</sup>. En la propia Comisión de la Constitución se define en qué consiste la propiedad en cuyo artículo 2º se señalaba que *los derechos de los españoles son la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad*, y en el 5º se defendía que la propiedad era *el derecho de gozar y disponer libremente de sus bienes y del fruto de su talento, de su trabajo y de su industria*. Ya en la Constitución se establecería en su artículo 4º del capítulo I, Título II que la *Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos sus individuos que la componen*<sup>1957</sup>. Bartolomé Clavero analiza la idea de la propiedad más

---

<sup>1955</sup> SEOANE, María Cruz, “El primer lenguaje constitucional español (Las Cortes de Cádiz)”, Madrid, *Moneda y Crédito*, 1968, p.134.

<sup>1956</sup> Diario de Sesiones de Cortes, T.IX, 1811, pp.23-24.

<sup>1957</sup> En opinión de la profesora Álvarez Alonso, *la solución constitucional fue sustancialmente distinta del proyecto que se había iniciado años antes, en 1810*, p.315.

como un derecho como un contenido de libertad, planteando que estamos ante una verdadera Declaración de Derechos<sup>1958</sup>. Refiriéndose al artículo cuarto de la Constitución apunta la definición de un derecho de la propiedad privada como *el concepto de entrada, la libertad civil, ya remite entonces a derechos de ejercicio individual, político o no; su segunda categoría es la más estrictamente civil de la propiedad, y, sobre todo, los sujetos de todos los derechos son los individuos. En este artículo se presagia, anunciándose a su modo, un sistema de derecho civil de sujeto individual y propiedad privada, esto es, el tipo de sociedad civil cuyo establecimiento más comprometidamente a su inicio se proclama en el caso francés (...)*<sup>1959</sup>. En el artículo 172 con referencia a la potestad del rey se restringe su autoridad en el ámbito del derecho de la propiedad privada: *No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesaria para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer, sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen cambio a bien vista de hombre buenos.* Alejandro Nieto destaca el hecho de que en Cádiz se plantearon y discutieron con *altura que luego no ha sido superada, todas las cuestiones concernientes a la desamortización civil.* El proceso se anudó con tres decretos. El primero, del 22 de marzo de 1811, privatizaría el dominio real; el segundo, de 6 de agosto de 1811, de la abolición de los señoríos, y un tercero, de 1813, por el que se privatizaría los bienes comunales.

Durante el Trienio Liberal, las ideas frustradas del constitucionalismo de 1812 se intentarán llevar a la práctica en el proyecto de elaboración de un Código Civil de 1821, insertándose los cuatro pilares fundamentales del ordenamiento liberal reclamado en el proceso revolucionario español del momento: la libertad civil, la seguridad del individuo, la igualdad legal de todos los ciudadanos, y el concepto sacralizado del derecho de la propiedad privada<sup>1960</sup>. Ya en el propio discurso preliminar se puntualiza que la *propiedad dejaría de serlo si la ley no la amparase contra los ataques de los perturbadores de*

<sup>1958</sup> CLAVERO, Bartolomé “Propiedad como libertad: la declaración del derecho de 1812”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, 60, 1990, pp.29-102. He aquí el manantial, la palanca, la ley de la gravedad, los principios generadores de la Constitución y de todas las leyes, su inspiración tan benéfica como lógica (...) Bajo la Constitución de Cádiz, durante su segundo y más importante periodo de vigencia, que va de 1820 a 1823, en 1821 más concretamente, podrá publicarse: La propiedad es la base de la sociedad política y de toda la legislación. Tras su tercera y última etapa, que se sitúa entre 1836 y 1837, en 1840, cuando ya ha sido sustituida, aún se proclama: el derecho de propiedad es el verdadero derecho por excelencia, el que todo representa, el que los simboliza, el que los comprende a todos.

<sup>1959</sup> Clavero apunta como entre las restricciones de la autoridad del Rey se encuentra el *no poder tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella.* CLAVERO, Bartolomé “Origen constitucional de la codificación civil en España (Entre Francia y Norteamérica)” en PETTIT, Carlos (Coord.) *Derecho privado y revolución burguesa*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1990, pp.64-65.

<sup>1960</sup> Sobre el proyecto del Código Civil de 1821, PESET, M. Análisis y concordancias del proyecto del Código Civil de 1821, en *Anuario de Derecho Civil*, Madrid, 1975, *Dos ensayos de la propiedad de la tierra.* Cabe destacar aquí el protagonismo del diputado liberal Nicolás María Gallery, que se imputa la autoría del proyecto codificador.

*cualquier clase. La sociedad entera se constituye fiadora del propietario y emplea todas sus fuerzas para asegurarle en el expédito uso y aprovechamiento de su propiedad. Por esta razón se llama sagrada, o, como si dijésemos, inviolable, porque la ley la protege como un sagrado, al que nadie puede llegar sin atacar las bases de la sociedad*<sup>1961</sup>. El artículo 42 del Proyecto del Código Civil de 1821 definiría el derecho de la propiedad como 1º El derecho de aprovecharse y disponer libremente del producto del trabajo personal; 2º El derecho de aprovechar los servicios que prestan a cada uno las personas o cosas ajenas con arreglo a la ley; 3º el derecho de usar, disfrutar y disponer libremente de las cosas muebles e inmuebles que pertenecen a uno o muchos en virtud del título establecido en la Ley. Como apunta Mariano Peset, este concepto de derecho de propiedad guardaba un estrecho paralelismo con el artículo 544 del Código francés revolucionario<sup>1962</sup>. Al mismo tiempo el derecho de la propiedad estaría presente en los debates parlamentario, pudiendo ser un ejemplo significativo de su defensa a ultranza las palabras de Agustín de Argüelles: *De todas las alteraciones que pueden ocurrir en un Estado, ninguna es más peligrosa y trascendental que el cambio de la propiedad: afecta y aún ataca el fundamento de la sociedad civil*<sup>1963</sup>.

Sin embargo, se asiste en esta etapa a la controversia entre iusnaturalistas y positivistas en torno al derecho de la propiedad privada en el ámbito español. Para el Iusnaturalismo, la propiedad era la base de donde se derivaban el resto de los derechos individuales, por lo que el derecho de la propiedad aparecía como una libertad medular y absolutamente originaria. En este sentido cabría mencionar la tesis de Joaquín María López, que llegaría a afirmar que *el derecho de propiedad es el verdadero derecho por excelencia, el que todos representa, el que los simboliza, el que los comprende a todos. La seguridad personal, la libertad civil no es más que la consecuencia y el respeto que merece el derecho de propiedad que tenemos sobre nosotros mismos*. A partir de 1820 comenzaría a emerger una rama liberal, gracias a las influencias de Bentham, especialmente desde el Trienio Constitucional, y que recogerían el sector moderado, considerándose que no existe derecho de la propiedad al margen del Estado, que no solamente lo limitaba, sino que también lo creaba<sup>1964</sup>. Cabe recordar las palabras que Ramón de Salas escribió en 1821 al definir la propiedad como la base de la sociedad política y de toda la legislación: *La propiedad es la base de la sociedad política y de toda legislación, porque sin propiedad, ¿cuál podría ser el objeto de la sociedad política y de las leyes? Precisamente para gozar de la propiedad segura y tranquilamente bajo la protección*

---

<sup>1961</sup> PESET REIGT, M., 1975, pp.96-97. *Proyecto del Código Civil que presenta la Comisión Especial de las Cortes, nombrada en 22 de agosto de 1820*.

<sup>1962</sup> PESET REIGT, M. “Acerca de la propiedad en el Code”, en *Revista Crítica del Derecho Inmobiliario*, año LII, julio-agosto, 1976, núm.515, pp.879-890.

<sup>1963</sup> El texto aparece insertado en el Diario de Sesiones, nº81, 5 de mayo de 1822.

<sup>1964</sup> FERNANDEZ SARASOLA, Ignacio “El derecho de propiedad en la historia constitucional española”, en VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín *Propiedad e Historia del Derecho*, Fundación Beneficentia et Peritia Uris, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2005, pp.79-80.



*de una fuerza pública, más poderosa que la fuerza de un individuo cualquiera, se reunieron los hombres en sociedad, renunciando a la independencia natural; luego lo primero que debe establecer una Constitución política es la seguridad de la propiedad*<sup>1965</sup>. En 1832, el jurisconsulto Pablo Gorosábel va a publicar un Proyecto de Código Civil, que constaría de 149 artículos y tres partes: De los estados domésticos, De las cosas y de los derechos que pueden tenerse sobre ellas, y de los diferentes modos de adquirir. En el Título II de la Parte II se incluiría el derecho de la propiedad privada, concretamente en el artículo 189, definiendo a la propiedad como derecho de gozar y disponer de una cosa como quiera<sup>1966</sup>. Con el golpe militar de 1836 se restablecería la Constitución de 1812, retomándose los trabajos para redactar un código civil, cuyo artículo 621, volvería a subrayar al derecho de la propiedad como *el que uno tiene en sus cosas para disponer de ellas a su arbitrio, con tal que no haga un uso prohibido por las leyes o pactos*, que como afirmaba Lasso Gaité, el contenido del artículo estaría inspirado en el recogido en el código francés, que defendía el carácter absoluto de la propiedad<sup>1967</sup>.

Durante la regencia de María Cristina asistimos al triunfo definitivo en la configuración del derecho de la propiedad privada. En la Exposición Preliminar al Estatuto Real ya se establecería su consagración: *en todos los siglos y países se ha considerado la propiedad, bajo una u otra forma, como la mejor prenda de buen orden y sosiego; así como, por el extremo opuesto, cuantos han intentado promover revueltas y partidos, soltando el freno de las pasiones populares, han empleado como instrumento a las turbas de los proletarios*. En el Estamento de Procuradores, Martínez de la Rosa, defendería como *El Estatuto Real ha fijado la propiedad como base del sistema electoral, pues con ella se consigue el único vínculo posible entre la propiedad y el orden*. Arguelles defendería en los mismos términos la defensa de la propiedad privada: *la propiedad ha sido mirada en todas las sociedades de Europa como la principal fianza, prenda o garantía de orden que liga a un ciudadano con su patria y con ella puede asegurarse que no lo comprometerá con la facilidad de otros*. En la Tabla de los Derechos aprobado por el estamento de los procuradores el 28 de agosto de 1834 fijaría definitivamente el concepto absoluto del derecho de la propiedad privada: la propiedad es inviolable, y se prohíbe la confiscación de bienes, aunque sujeta a las penas impuestas y a la expropiación, previa indemnización, por objeto de utilidad pública (art.9). En

<sup>1965</sup> SALAS, Ramón *Lecciones de Derecho Público Constitucional*, Parte I, Lección XI, 1821, p.79.

<sup>1966</sup> GOROSABEL, Pablo Redacción del Código Civil de España, esparcido en los diferentes cuerpos de derecho y leyes sueltas de nuestra Nación, escrito bajo el método de los códigos modernos, Imprenta de la Viuda de la Lama, Tolosa, 1832, p.45,

<sup>1967</sup> LASSO GAITE, Juan Francisco *Crónica de la codificación española. Codificación Civil (Génesis e historia del Código)* Vol.IV. Tomo II, ed. Ministerio de Justicia, Madrid, 1994, p.127.



el texto se reiterará por dos veces el carácter de derecho fundamental de la propiedad junto al de la libertad individual y a la seguridad (art.10 y 11)<sup>1968</sup>.

La propiedad defendida por los liberales y protegida por la **Constitución de 1837** es de titularidad individual y plenamente disponible. Como afirma Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz *los escasos pero influyentes representantes de la burguesía urbana más próspera, que era la base sociológica e ideológica del liberalismo y también su sustento económico y electoral, no dudaron en incluir la protección de la propiedad como uno de los contenidos fundamentales de la Constitución (...) la Constitución no enuncia explícitamente la propiedad privada como un derecho fundamental de los españoles, pero lo afirma implícitamente al asegurar que ninguno podrá ser privado de ella sin su consentimiento (...) La propiedad defendida por los liberales y protegida por la Constitución es de titularidad individual y plenamente disponible*<sup>1969</sup>. En el artículo 10 se protege la propiedad privada al prohibir la confiscación de bienes y exigir que las expropiaciones estén justificadas por su interés general y se indemnicen: *No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común previa la correspondiente indemnización*. Además del artículo 10º podemos encontrarnos otras disposiciones muy vinculadas a la propiedad privada como se puede apreciar en el artículo 6º, por lo que todo español tenía que contribuir a los gastos del Estado en proporción de sus haberes, por lo que mostraba una barrera frente a las exacciones fiscales abusivas.

La nueva sociedad burguesa nacida en este momento va a tener al mismo tiempo su reflejo en el **Proyecto del Código Civil de 1836**, que a pesar de no ser promulgado, ni siquiera dictaminado por la comisión parlamentaria correspondiente, se considera el primer borrador completo de un Código de Derecho Privado burgués, siendo la base de la redacción de los procesos codificadores en la etapa isabelina y durante la Restauración<sup>1970</sup>. En dicho Proyecto ya se apuntaba que el derecho de la propiedad privada es *un derecho sagrado, eje del ordenamiento jurídico, y lo convierte en el vínculo más firme de la sociedad (...) sin el cual jamás prosperará la agricultura y la industria (...) mientras que el individuo no esté seguro de que será respetado en lo que posee, ya sea debido al producto de su trabajo, ya a cualquier otro medio de adquisición legislativa, no hay que esperar adelantamientos, laboriosidad, celos y patriotismos*<sup>1971</sup>. En el contenido

---

<sup>1968</sup> MATILLA, M<sup>a</sup> Jesús y FRAX, Esperanza Libertad de industria y comercio. El derecho de la propiedad, en FLAQUER MONTEQUI, ed. Derechos y Constitución, en *Ayer*, 34, 1999, pp.31-32.

<sup>1969</sup> RODRIGUEZ-TOUBES MUÑIZ, Joaquín “Los derechos fundamentales en la constitución española de 1837”, en PUY MUÑOZ, Francisco (Coord.) *Los derechos en el constitucionalismo histórico español*, Universidad de Santiago de Compostela, 2002, pp. 67-69.

<sup>1970</sup> BARÓ PAZOS, Juan *La codificación del Derecho Civil en España (1808-1889)*, Universidad de Cantabria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1992, Santander, pp.67-69.

<sup>1971</sup> LASSO GAITE, J.F. *Cronica de la codificación española. Codificación Civil*. Madrid, Minsiterio de Justicia, 1970, T.I, pp.97 y ss.

del Título I del Libro I se incluyen los derechos de las personas en general, especialmente la libertad individual, entendida como *la facultad que tiene cada uno de disponer de sí y de sus cosas según le convenga, a menos que lo prohíba alguna ley o pacto*, por lo que limita la intervención del Estado en la esfera particular, la seguridad personal, que se fundamenta en como un derecho civil que afianza el derecho de propiedad y los demás derechos personales y tercero, el principio de la igualdad ante la ley, aunque civil y no política. El derecho de la propiedad privada se haya recogido en el Libro II, que la Exposición de Motivos califica como *sagrado derecho de propiedad... y el vínculo más firme de la sociedad*. El Título II define el derecho de propiedad como *el derecho que uno tiene en sus cosas para disponer de ellas a su arbitrio, con tal que no haga un uso prohibido por las leyes o pactos. Este derecho se llama también dominio* (art.621). Como apunta Juan Baró Pazos no aparece mención alguna en este Proyecto a la enajenación o expropiación forzosa de la propiedad individual por causa de utilidad pública, porque este asunto, como manifiestan los redactores de su Exposición de Motivos, se hallaba sometida a la deliberación de las Cortes. En el Proyecto se articulaba los modos de acceso al derecho de la propiedad exclusiva como eran la ocupación, la accesión, la entrega legítima y la prescripción<sup>1972</sup>.

Cabe mencionar, por su reflejo en el ordenamiento de la tutela del Patrimonio Monumental, la regulación de la ocupación de las cosas, que jamás ha tenido dueño (art.634), concretamente en el caso de la adquisición de dominio sobre los tesoros o alhajas aparecidas en terreno de cuyo propietario no puede tenerse noticia, recogiendo la doctrina establecida en el Código de las Siete Partidas que establecía que si cualquiera encontrare en terreno ajeno, buscándolo a propósito o a escondidas, y no por casualidad, nada percibía del tesoro, por lo que todo sería del propietario del fundo. Al mismo tiempo se recogía en el Proyecto que la entrada sin consentimiento del dueño en el terreno de su propiedad constituía una violación del derecho absoluto y exclusivo de la propiedad, por lo que en el caso de que el inventor previamente hubiera solicitado previamente permiso al propietario del fundo, se entendería salvaguardado el derecho de la propiedad privada, ya que en este supuesto, la mitad de lo hallado correspondería a quien lo encuentra, en virtud del derecho de ocupación, la otra mitad sería para el dueño de la finca fundamentado en el derecho de accesión. En el caso de los bienes declarados vacantes, o que han sido desamparados por sus antiguos propietarios, con ánimo de no poseerlos, pertenecen por derecho de ocupación al Estado. De esta manera se había copiado el contenido normativo de la Ley de 16 de mayo de 1835<sup>1973</sup>.

En los años treinta y cuarenta se asiste a una gran ofensiva en la legitimación de la propiedad privada como un derecho natural que nadie se

<sup>1972</sup> BARO PAZOS, Juan, 1992, p.79.

<sup>1973</sup> BARO PAZOS, Juan, 1993, p.79.

atreve a matizar o a cuestionar. Martínez de la Rosa escribe en *El Espíritu del Siglo* que *son tan íntimas sus relaciones con el establecimiento de la sociedad civil, que puede decirse que nacieron juntas y que han seguido siempre los mismos progresos*. Incluso en los periódicos como el *Eco del Comercio* del 18-I-1835 se llegaría a afirmar que *la propiedad se ha fijado en todos los países cultos de la Europa moderna como base y garantía para apreciar el apego de los ciudadanos al orden existente*. Balmes desde una posición conservadora definiría el derecho de la propiedad privada como de *inviolable, sagrado, reconocido en todos los tiempos y países, fundado en la ley natural, sancionado por la divina, consignados en todas las humanas y reclamado por los más caros intereses del individuo y de la sociedad*. Incluso los republicanos en 1841 define una posición favorable al derecho de la propiedad privada<sup>1974</sup>. Prácticamente en la misma línea podemos incluir la definición que dan los juristas Pedro Gómez de la Serna y Juan Manuel Montalbán: *La propiedad es hija de la constitución de nuestra propia existencia y de las distintas relaciones que tenemos con los objetos que nos rodean. Base de todo el edificio público, ha dado al hombre el señorío de la tierra, ha civilizado la sociedad y ha producido el amor a la patria y a la familia*<sup>1975</sup>.

Es en los textos del economista Florez Estrada donde encontramos una referencia vital para comprender el concepto de propiedad que se va a ir gestando en la configuración inicial del Estado Liberal. En una de sus obras más significativas, *Curso de Economía Política*, enfatiza el concepto de propiedad y plantea el valor que ésta tiene en la configuración de la sociedad: *El derecho de la propiedad es la cosa que el hombre más aprecia y necesita. Si analizamos el motivo principal de las innumerables leyes que se conocen en los distintos pueblos de la tierra, hallaremos que todas ellas tienen como objetivo próximo o remoto hacer respetar tan apreciable derecho. Nada hay que afecte al hombre de un modo tan profundo y constante como cuando contribuya a satisfacer sus necesidades (...) De aquí todas las leyes civiles y penales (...) En efecto, puede asegurarse que el país donde el derecho de la propiedad sea tan respetado como debe serlo, los crímenes quedará reducido a una escala muy insignificante*<sup>1976</sup>. En palabras de Tomas y Valiente, *en el pensamiento de Flórez concerniente al derecho de la propiedad destaca la amplitud con que lo concibe. Para él es una amplia facultad de cuyo contenido y libre ejercicio depende el orden social y la felicidad individual (...) la función del Estado respecto a la propiedad es doble: por una parte, debe garantizar la inviolabilidad de tan natural derecho; por otra, debe intervenir lo menos posible para limitar su ejercicio y debe actuar sobre el patrimonio individual sólo en circunstancias muy excepcionales*<sup>1977</sup>. El régimen del derecho de la

---

<sup>1974</sup> FRANCISCO FUENTES, Juan Propiedad en FERNANDEZ SEBASTIAN, Javier; FRANCISCO FUENTES, Juan (dirs.) *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Madrid, 2002, pp.578-579.

<sup>1975</sup> GOMEZ DE LA SERNA, Pedro; MONTALBAN, Juan Manuel *Elementos del Derecho civil y penal de España*, 4ª edición, Madrid, 1851 (1ª edición, 1841), pág.327.

<sup>1976</sup> FLOREZ ESTRADA, *Curso de economía política*.

<sup>1977</sup> TOMAS Y VALIENTE, Francisco *La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen en Historia de España Tomo XXXIV, La era isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874)*, Madrid, 1991, p.146.

propiedad privada fundamentaría todo el sistema normativo del régimen liberal, proyectándose en todos la articulación política y social, como se puede contemplar en el propio sistema electoral, en el que se defendería el hecho que solamente los propietarios podían adquirir la condición política que le hacía partícipe de la vida pública. Había nacido sin más un estado de propietarios, por lo que amplias capas sociales permanecerían durante algún tiempo al margen del ritmo de la vida social y política<sup>1978</sup>. Como afirma Juan Alfonso Santamaría Pastor *cuando termina la guerra de los siete años y Espartero se alza como nuevo árbitro de la situación política, la burguesía ostenta prácticamente la totalidad del poder económico en España: y a partir de este momento pretenderá asociar el poder político al poder económico, instrumentalizando el aparato del Estado en su propio beneficio, para incrementar y proteger su status patrimonial*<sup>1979</sup>.

### **1.2.2. La expropiación forzosa como delimitador del derecho absoluto de la propiedad privada: Real decreto de 17 de julio de 1836.**

El contenido político-jurídico del derecho de la propiedad privada como derecho primordial del Estado Liberal que se está iniciando en esta etapa, que le ha llevado a una mera sacralización del mismo, si utilizáramos las palabras de Alejandro Nieto, defendido desde todas las posiciones políticas de carácter liberal, no va a significar una intangibilidad del mismo, ya que como había ocurrido en la experiencia revolucionaria francesa, va ir surgiendo la idea de un interés común o general, que en algunos casos de conflictos, prevalecía incluso sobre el derecho de la propiedad privada, siempre que tuviese una garantía: la existencia de un procedimiento acorde para ello y que al mismo tiempo el propietario fuera compensando con una indemnización. Al presentarse ante el Estamento el proyecto de la Comisión, Feix señalaría: *Todas las naciones cultas de Europa han considerado como principio fundamental al respetar la propiedad particular, pero como el bien general o común es superior al individual, han atribuido a los Gobiernos la facultad de poder obligar a su dueño a que la ceda o enajene por causa de utilidad pública precediendo una justa indemnización: sin ésta sería atacar uno de los derechos del hombre*. Nacía la regulación de la expropiación forzosa, que en cierta manera en aras de la utilidad pública abriría agrietado la solidez irreductible de la propiedad privada sin más. La expropiación forzosa se concibe en los orígenes del Estado Liberal como último límite del derecho natural, sagrado e inviolable de la propiedad privada, y se reduce inicialmente, a operar sobre los bienes inmuebles con fines de construcción de obras públicas.

<sup>1978</sup> Alejandro Nieto puntualiza cual es el significado constitucional de la propiedad: *La propiedad proporciona, un poder económico y también un poder social, al menos en dos sentidos: el propietario domina directamente al proletariado que le sirve y, además, gracias a la propiedad se puede adquirir con facilidad una formación cultural que es, por si misma, una nueva plataforma de poder social. Por si fuera poco, la propiedad asegura también un poder político desde el momento en que los propietarios pueden controlar electoralmente a los arrendatarios y obreros que de ellos dependen (...)*. NIETO, A., p.556.

<sup>1979</sup> SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso *Sobre la génesis del derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1845)*, Biblioteca Jurídica Básica, 5, 2006, p.143.

Sería el **17 de julio de 1836** cuando se aprobaría la ley de la expropiación privada, unas pocas semanas antes de los acontecimientos de la Granja y el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. En el artículo 1º ya se fundamentaba el principio del interés general sobre el derecho de la propiedad privada, pero siempre estableciendo una serie de garantías: *Siendo inviolable el derecho de la propiedad, no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie, a que ceda o enajene lo que sea de su propiedad para obras de interés público, sin que precedan los requisitos siguientes: Primero: Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso competente para ejecutarla. Segundo: Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene del todo o parte de una propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública. Tercero: Justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse. Cuarto: pago del precio de indemnización. Cuarto: Pago del precio de la indemnización.* La cuestión primordial de esta nueva realidad jurídica será la delimitación del concepto de utilidad pública, ya que en principio va a identificar una ambigüa. En el artículo 2º se consideraba obra de utilidad pública *las que tienen por objeto directo proporcionar al Estado en general, a una o más provincias o a uno o más pueblos cualesquiera usos o disfrutes de beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta del Estado, de las provincias o pueblos, bien por compañías o empresas particulares, autorizadas competentemente*<sup>1980</sup>. En el debate parlamentario se pronunciaría en estos términos: *¿Qué deberá entenderse por pública utilidad? Esta voz, como todas las abstractas, tiene una significación relativa y no es posible, por tanto, fijar absolutamente su acepción terminante. El verdadero valor de la palabra utilidad pública sólo podrá apreciarse al tiempo de hacer aplicación de ella a los casos particulares*<sup>1981</sup>. En el artículo 3º de la Ley de Expropiación Forzosa se establecería que *la declaración de que una obra es de utilidad pública, y el permiso para emprenderla, serán objeto de una ley, siempre que para ejecutarla haya que imponer una contribución que grave á una ó más provincias. En los demás casos serán objetos de una Real Orden. Una vez declarada la necesidad de ocupar el todo o parte de una propiedad, se justipreciará el valor de ella y el de los daños y perjuicios que puedan causar á su dueño la expropiación, a juicio de peritos nombrados uno por cada parte, o tercero en discordia por entrambas* (art.7)<sup>1982</sup>.

---

<sup>1980</sup> Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidas por la Secretaria del Despacho desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1836., Tomo XXVII, Segunda Edición. Madrid, Imprenta Nacional, 1842, pp.278-279.

<sup>1981</sup> NIETO, Alejandro,

<sup>1982</sup> La ley sobre enagenación forzosa de la propiedad particular en beneficio público del 17 de julio de 1836, así como el debate y la discusión del debate del proyecto de ley está recogido en LORA-TAMAYO VALLVÉ, Marta *Historia de la legislación urbanística*, Ministerio de la Vivienda, Madrid, 2007, pp. 75-96; GARCÍA DE ENTERRÍA, E. *Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa*, IEP, Madrid, 1956, p.24. La Ley apareció publicada en la Gaceta de Madrid, núm.581, 21/07/1836/, p.1. El proyecto de Ley está publicado en la Gaceta de Madrid, núm.499, de 03/05/1836, p.4.



## 2. La configuración inicial del patrimonio monumental estamental como bienes nacionales a raíz de los procesos revolucionarios.

### 2.1. La irrupción del modelo tutelar monumental de la Francia Napoleónica: La concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico Estamental como Bien de Interés nacional.

La llegada de José I Bonaparte a España en 1808 simboliza la ruptura con el sistema del Antiguo Régimen y abre el camino a los llamados procesos liberales de los decenios liberales decimonónicos. No es este el lugar para hacer un juicio de valor de su reinado, objeto de un amplio debate historiográfico, desde las posiciones más recalcitrantes hacia su figura hasta posturas más próximas a su figura como monarca reformista<sup>1983</sup>. En el ámbito de la tutela patrimonial, que es el objeto de este estudio, nos encontramos con un periodo convulso, especialmente por las circunstancias políticas y sociales que se estaban desarrollando en este momento, donde al pillaje y saqueos de amplias colecciones pictóricas de gran valor artístico se le va a unir como en la lectura de la otra cara de la moneda de un periodo de medidas tutelares que en muchos casos de haberse llegado a feliz término hubiera llevado a una verdadera institucionalización administrativa del patrimonio monumental, pero que con la derrota francesa no se llevaría a cabo<sup>1984</sup>. Al mismo tiempo nos encontramos ante la figura de un monarca de perfil intelectual, amante de las artes, coleccionistas de todo tipo de obras, con una concepción del Patrimonio Histórico-Artístico propio de la Francia Napoleónica. José Bonaparte conocerá el país que gobierna a través de algunos viajes y se irá impregnando de un espíritu nacional que lo aproximará al Patrimonio Monumental de la nación sometida. La preocupación patrimonialista del monarca francés también se aprecia en algunas de los viajes que realizó a las ciudades españolas, preocupándose por el estado de conservación de algunos bienes inmuebles. Un

<sup>1983</sup> Las palabras de Manuel Moreno José Bonaparte subraya la valía del periodo bonapartista en España: *considerado por los patriotas después de Bailén como el Rey Intruso, fue el protagonista a pesar suyo de aquella España en guerra. Hoy no es posible negar su voluntad modernizadora y regeneracionista, lo que explica su aceptación por parte de las élites. La prensa afrancesada, a pesar de sus limitaciones, es muestra de ello. La Constitución de Bayona es un hito representativo de esta nueva actitud (...) El nuevo Estado bonapartista intentó estructurar la vieja Monarquía con una nueva savia reformadora, de gran calado teórico. Pretendió reformar hasta las ciudades. Otra cosa fue, después, la realidad tanto por la rapacidad de los soldados como por los efectos de la guerra.* MORENO ALONSO, Manuel “La Guerra de la Independencia: la bibliografía del bicentenario” *Historia Social*, 64, Madrid, 2009, pp.156-157. Sobre la figura del monarca, MORENO ALONSO, Manuel *José Bonaparte. Un republicano en el trono de España*. La Esfera de los Libros, Madrid, 2008; *La Sevilla Napoleónica*, Alfar, Sevilla, 1995.

<sup>1984</sup> Al respecto Antigüedad precisa como *el reinado de José Bonaparte, a pesar de su brevedad y de transcurrir todo él en una ininterrumpida guerra, tuvo una serie de aspectos positivos para la Historia de las Bellas Artes merecen resaltarse. Los intentos de este monarca por mejorar la cultura española y sus ideas avanzadas, no siempre comprendidas por quienes debían recibirlas, fueron el germen de notables realizaciones durante el siglo XIX; sus proyectos serían retomados por los gobiernos liberales y ejecutados con bastantes años de retraso.* ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO OLIVARES, M<sup>o</sup> Dolores, “Un pleito artístico: Granada y el Museo Josefino” *Espacio, Tiempo y Forma*. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, 2, 1988, p.259.



caso significativo sería la visita a Granada en marzo de 1810, recogido en las páginas de la Gaceta de Madrid, donde se plasmaría la inquietud conservacionista que mostró sobre la Alhambra: *Su Majestad emplea el corto tiempo que le queda después de sus tareas en reconocer las antigüedades de esta ciudad y sus amenas cercanías. Estos objetos, al mismo tiempo que dan idea de la antigua opulencia y gloria de Granada, causan una impresión dolorosa al ver el estado de decadencia en que todo se halla. Inmensa es la diferencia que se observa entre el estado actual de la Alhambra y demás monumentos moriscos con lo que sabemos fueron en los días de prosperidad y gloria de los Reyes Moros de Granada*<sup>1985</sup>.

Con el advenimiento de la España Napoleónica se va delimitar un nuevo modelo tutelar del Patrimonio Histórico-Artístico, su configuración jurídica como bien de interés nacional, por el que se culminaría el camino de la transformación jurídica de la propiedad monumental. El Estado afrancesado va a intervenir en propiedades privadas, al igual que lo hiciera a modo de ensayo la Monarquía del Despotismo Ilustrado, especialmente en el ámbito de las propiedades eclesiásticas, que se nacionalizan y se insertan como bienes nacionales. Sin embargo, en el caso del Despotismo Ilustrado es la Monarquía, identificada con el Estado, la que asume la propiedad pública de los bienes adquiridos, mientras que la Monarquía Francesa Bonapartista lo hace en nombre de una Nación, que ha sustituido el perfil del absolutismo monárquico. En el camino a esta concepción pública del Patrimonio Monumental en el ámbito español durante la etapa bonapartista, no cabe duda que encontramos una impronta del derecho revolucionario francés, y se convertirá sin duda alguna en el verdadero modelo en que la España Liberal va mirarse posteriormente a la hora de planificar una tutela pública patrimonial. Tres caracteres serán primordiales en la configuración del Patrimonio Histórico-Artístico como Bien de Interés Público:

1º) Una nueva concepción jurídica del Patrimonio Histórico que va a plantearse en la España Josefina que tendrá dos lecturas: la destrucción que produce la guerra y el pillaje de los vencedores y la génesis de una concienciación nacional del Patrimonio que se va a dar al mismo tiempo que en el plano político, aunque probablemente solamente lo percibimos en algunas minorías.

2º) El diseño de una Administración Tutelar del Patrimonio Histórico-Artístico, que aunque no será eficiente, por las circunstancias políticas y sociales del momento, van abriendo una institucionalización específica, que recogerá posteriormente el Estado Liberal.

---

<sup>1985</sup> El texto se recoge en CALATRAVA, J., 2005, p.153.

3º) La acción de la Administración Tutelar que va ir definiendo una tendencia a la intervención estatal sobre los intereses particulares de los coleccionistas privados.

### **2.1.1. Destrucción y conservación como principios delimitadores de la conciencia nacional del Patrimonio Monumental en la España Josefina.**

La tragedia que significó la destrucción patrimonial causada por los ejércitos franceses unidos a las acciones de los mercaderes fraudulentos, que ya estaban en la Península antes de la invasión, no debe de ensombrecer el impacto que produjo en la concepción patrimonial en el ámbito español. En realidad se convierten en dos caras de una misma moneda, en la que probablemente la destrucción patrimonial y la oposición por lo francés dieron lugar a la concienciación patrimonial de carácter nacional, aunque con matices muy concretos, ya que no desligaría definitivamente de las raíces culturales que había significado la mentalidad contrarreformista y absolutista de exaltación de los valores de la Iglesia y de la Monarquía, que se traduciría políticamente en los enfrentamientos entre absolutistas y liberales durante gran parte del siglo XIX, y en el ámbito de lo cultural en una concepción tradicionalista del legado histórico-artístico. Destrucción y conciencia nacional en definitiva que traducen en cierta forma los términos de vandalismo y conservación que se había producido en el ámbito revolucionario francés.

#### **2.1.1.1. Una mirada crítica a la destrucción patrimonial.**

En los últimos años se han ido publicando un gran número de publicaciones sobre la amplia pérdida del Patrimonio Monumental causado por la invasión francesa en un gran número de ciudades, pueblos y localidades españolas. Podemos afirmar que prácticamente no existió un lugar en España con presencia francesa donde no hubiera un despojo del patrimonio local. A ello hay que unir la actitud de algunos círculos de intelectuales, grupos de poder local, conocidos con el sobrenombre de los afrancesados, que ayudaron en muchas ocasiones a localizar las obras artísticas que quería adquirir el invasor. Durante todo el siglo XIX una legión de cronistas, investigadores locales, académicos y eruditos denunciaron los atropellos del francés y los abusos cometidos al despojarle de amplios bienes que habían pertenecido al coleccionismo monárquico o eclesiástico. Algunos testigos de excepción como el político José María Queipo de Llano, Conde de Toreno, menciona los pillajes que se efectuaron en Andalucía o Castilla<sup>1986</sup>. Hempel Lipschutz en su obra *El despojo de las obras de arte en España durante la Guerra de la Independencia* recogió las amplias pérdidas que se van a producir en nuestro país desde 1808 hasta incluso en la retirada de los ejércitos franceses<sup>1987</sup>. Una de las investigadora que con más vitalidad ha analizado la pérdida del

<sup>1986</sup> Sobre el expolio patrimonial realizado por los franceses GAYA NUÑO, Juan Antonio *La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos*. Madrid, 1961.

<sup>1987</sup> HEMPEL LIPSCHUTZ, Ilse *El despojo de las obras de arte en España durante la Guerra de la Independencia Arte Español*, 1961, p.217.

Patrimonio Monumental a raíz de la invasión francesa ha sido M<sup>o</sup> D. Antigüedad del Castillo especialmente por la geografía de Castilla y Aragón<sup>1988</sup>, o en la propia capital del reino, donde gran número de conventos fueron expoliados<sup>1989</sup>. Sería imposible y no es nuestra pretensión hacerlo, recoger en este trabajo toda la producción artística perdida durante la invasión francesa<sup>1990</sup>, por lo que vamos a intentar abordar un caso que en sí mismo puede ejemplificar a todos, como fue el azote que padeció la ciudad de Sevilla. Tras las Capitulaciones de Torreblanca en 1810, por lo que la ciudad se rendiría antes el invasor francés, después de haber huido la Junta Central hacia Cádiz<sup>1991</sup>.

La actitud del ejército francés va a ser determinante a la hora de valorar la destrucción patrimonial, por lo que no cabe duda que las ansias de rapiña ensombrecieron la labor que en el ámbito patrimonial diseñara el gobierno establecido en Sevilla<sup>1992</sup>. M. Gómez Ímaz publicó en 1896 una interesante obra titulada *Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno Intruso en Sevilla en el año 1810*, donde nos da noticia con todo detalle de las amplias pérdidas que supuso el expolio de los invasores franceses en la ciudad hispalense<sup>1993</sup>. En el prólogo de la publicación que se ha hecho sobre la obra de

---

<sup>1988</sup> ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO, M<sup>o</sup> D. Arte y coleccionismo en Burgos durante la ocupación francesa *Espacio, Tiempo y Forma*, 2, 1989, pp.329-342.

<sup>1989</sup> ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO, M<sup>o</sup> D. *José Bonaparte y el patrimonio artístico de los conventos madrileños*. Madrid, 1987.

<sup>1990</sup> Existe múltiples testimonios literarios de la época sobre la destrucción patrimonial. El conde de Toreno dejaría en sus Memorias *Recogió Murat en su tiempo varios de ellos, principalmente del real Palacio y de la casa del Príncipe de la Paz, parando mucho su consideración los cuadros del Correggio que casi se llevó los que España poseía, entre los cuales merece citarse el llamado Escuela del Amor, que fue de los duques del Alba*.

<sup>1991</sup> MORENO ALONSO, M. *Sevilla Napoleónica*. Sevilla, 1995

<sup>1992</sup> Enrique Valdivieso ha resumido con :*El despojos de las obras de arte, especialmente pictóricas que Sevilla sufrió en 1810, por parte de los invasores franceses es un hecho que tiene muy poco parangones históricos y por ello puede señalarse como casi único, antes y después de esa fecha. Es por lo tanto uno de los ejemplos de expolio artístico más lamentable que se ha producido a lo largo de los siglos y que vino a privar a esta ciudad de gran parte del espléndido repertorio de pinturas que había en iglesias y conventos. A estas instituciones religiosas se les privó de sus más importantes señas de identidad, y se les arrebató no solo piezas de altísimo valor artístico y económico sino también del mensaje espiritual que emitían en sus lugares de origen*.

<sup>1993</sup> M. Gómez Ímaz señala que *De la riqueza artística que había en Sevilla y que inicualemente sustrajeron los invasores, baste decir, que según acusa el Inventario (...) que el total de cuadros inventariados llegó al fabuloso número de 999*, p.113. GÓMEZ IMAZ, M., *Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno Intruso en Sevilla en el año 1810*, 1896/2009, p.113. Sin entrar en un inventario exhaustivo, podemos citar alguno de los ejemplos más significativos de la producción pictórica pertenecientes a conventos e instituciones religiosas sevillanas. Entre las composiciones que se perdieron pertenecientes al pincel de Murillo se encontrarían las series del claustro chico del convento de San Francisco de Sevilla, la de Santa María la Blanca, algunos de la Caridad y los Venerables, parte de las colecciones de San Agustín y el famoso *Nacimiento* de la Catedral. A los cuadros murillescós, se unirían composiciones de figuras significativas de la pintura sevillana como Ribera, Zurbarán, Alonso Cano o Valdés Leal. El Hospital de la Caridad perdería algunos de sus composiciones murillescás más significativas como fueron *San Pedro liberado por un ángel*, hoy en el

Gómez Imaz, el profesor Valdivieso lamenta ampliamente la pérdida del Patrimonio Monumental Hispalense. Sin duda alguna Nicolás Jean de Dieu Soult (1769-1851), uno de los generales más apreciado por Napoleón, se ha convertido en el ejemplo más significativo del general francés que llevado por sus ansias de rapiña<sup>1994</sup> conseguiría más de doscientas obras de pintura española del siglo de oro, entre las que se encontraría primordialmente seis Canos, diecisiete Zurbaranes o los veintidós Murillos, siendo éste último pintor el más cotizado en el mercado artístico desde prácticamente su muerte<sup>1995</sup>. En su adquisición va a ayudarles eruditos locales de la talla de Céan Bermúdez, que serían tachados de afrancesados<sup>1996</sup>, e incluso el propio rey francés le obsequiaría con un gran número de lienzos. Las obras adquiridas por el Mariscal Soult se convertirían en propiedad privada, por lo que Soult conservaría intacta su colección de cuadros, incluso después de la derrota de

---

Ermitage de San Petesburgo; *La curación del paralítico*, de la Nacional Gallery de Londres, *La vuelta del Hijo Pródigo*, en Washington y el *Abraham y los tres ángeles*, en Ottawa. Por su parte el Convento de la Merced no se salvaría del expolio, así las obras de Valdés Leal que realizara para flanquear el altar mayor, una *Asunción* y una *Inmaculada*, se desconoce su paradero en la actualidad, siendo trasladadas en 1810 al Alcázar, el famoso *San Rafael y el obispo Domonte* de Murillo, actualmente en el Museo Puschkin, de Murillo, a las que se unían una *Huída a Egipto* y un *San Luis*, que sería sustraída por Soult<sup>1993</sup>. Algunos lienzos de Francisco Zurbarán que ornamentaban las paredes del claustro de los bojes fueron objetos de expolio. El Hospital de los Venerables, que había sido fundado por el canónigo Justino Neve, sería desposeído de algunos sus mejores producciones, como el *San Pedro arrepentido*, actualmente en Newick; *El Niño Jesús repartiendo pan a los peregrinos* en Budapest y la *Inmaculada*, que sería recuperada ya en 1941 por el Museo del Prado. El convento de San Francisco se *El alma de Felipe II sube al cielo*. El convento de San Agustín quedó prácticamente despojado, destacando la pérdida de una de las piezas más significativas de la producción sevillana, el *Santo Tomás de Villanueva, niño, repartiendo limosnas*, de Murillo. Algunas composiciones pudieron salvarse del expolio, al ser llevadas a Gibraltar, como las series del convento de San Leandro y de las Capuchinas.

<sup>1994</sup> El propio General Thiébault recoge en sus Memorias el carácter del Mariscal Soult: *Sus rapiñas son de sobra conocida por mí, por el expolio de las ricas abadías en Austria durante la campaña de Austerlitz (...) por la masiva cantidad de cuadros que se llevó de Sevilla y que tuvo la falta de pudor de colgar en las paredes de su residencia en París y del castillo que acababa de construir en Languedoc*, en STAMPA PIÑEIRO, L., 2011, p.319.

<sup>1995</sup> Probablemente sea el pintor sevillano el favorito entre los franceses, ya que era el único que se mencionaba en los catálogos de ventas de colecciones, adquiriendo algunos de sus cuadros un alto precio en el mercado. Así el rey Luis XVI habría comprado entre 1782 y 1786 dos cuadros de Murillo de colecciones privadas, y en 1784, el conde Vaudreuil compraría dos Murillos. Como apunta María de los Santos García Felguera *a lo largo del siglo XVIII se compran en Francia cuadros de Murillo y otros pintores, mientras los maestros españoles van apareciendo como figuras cada vez mejor perfiladas en la literatura artística y de viajes. Los interesados ya pueden saber quiénes fueron, qué pintaron e incluso dónde encontrar sus obras. Ya no sólo hay algún cuadro en colecciones particulares; además se pueden ver libros con reproducciones en las librerías, lo cual está al alcance de un público cada vez más amplio. La guerra de la Independencia hará el resto*. GARCIA FELGUERA, María de los Santos *La fortuna de Murillo (1682-1900)*. Sevilla, 1989, pp.97-100.

<sup>1996</sup> Soult enviaría más de cinco lotes de cuadros a su casa particular en París, estudiado por Leopoldo Stampa, entre los que se encontraban los famosos lienzos de Alonso Cano del desaparecido convento de Santa Paula, que hoy todavía suscita polémicas, como queda reflejado en el artículo de Gotteri titulado *Deux tableaux d'Alonso Cano au musée du Louvre*, publicado en la Revista du Louvre, en 1979, intentando justificar la actitud del mariscal francés.

las guerras napoleónicas de 1814 y 1815<sup>1997</sup>. Sus cuadros se ubicarían en su mansión particular, el hotel de la rue de l'Université, convirtiéndose en un centro de atención de aficionados al arte y de artistas como fue el caso de Delacroix. A su muerte, sus hijos, el duque de Dalmacia y la duquesa de Mornay, organizaron una venta pública en la antigua galería del pintor Lebrun, por lo que acudieron compradores de toda Europa<sup>1998</sup>. Al mismo tiempo que Soult desposeería a los conventos de estos tesoros artísticos, otros mariscales, como Lejuene, que además era pintor, se dedicaron a hacer lo mismo, como la adquisición conocida de las composiciones de San Francisco de Sevilla, el general Sebastiani, que se llevaría de Barcelona más de cien cuadros, siendo posteriormente subastados en París los días 24 al 28 de noviembre de 1851, el general Merlin, Lapeyriere, Belliard, y Le Fabre. El destino de estas obras fue el de la subasta pública, como apunta Leopoldo Stampa *las viudas de los oficiales y las familias bonapartistas nutrieron de obras de arte sacadas de España por los mandos napoleónicos a las frecuentes subastas anónimas que tuvieron lugar desde 1810, casi al comienzo de la guerra. A partir de la debacle napoleónica la situación económica personal de aquellas familias forzó a dar salida a las obras al mercado y se generalizaron las subastas (...). A partir de la década de los treinta, las ventas públicas se generalizaron (...)*<sup>1999</sup>, por lo que un gran número de los cuadros expoliados quedarían instalados en las salas del Museo del Louvre, el Museo de Bellas Artes de Budapest, la National Gallery de Londres, el Ermitage de San Petersburgo y otros museos y galerías de Europa y Norteamérica, concretamente en el Ringling Museum de Sarasota (Florida), en la Hispanic Society of América de Nueva York, la Galería Munt de Nueva York, etc<sup>2000</sup>.

#### **2.1.1.2. La génesis de la conciencia nacional del Patrimonio Histórico-Artístico a raíz de la destrucción patrimonial.**

No cabe duda que la destrucción patrimonial va a producir una actitud de rechazo en amplios sectores de la población española, no solamente en los ámbitos eruditos, siendo el desencadenante de un proceso de españolización del patrimonio monumental que hasta este momento no se había dado en la conciencia colectiva, un inicio de un proceso nacionalizador que se intensificará con los gobiernos liberales del siglo XIX, especialmente en la configuración del Estado-Nación. El proceso de nacionalización cultural

---

<sup>1997</sup> DELENDÁ, Odile "Las santas de Alonso Cano en la colección Soult" *Goya*, Enero-Febrero, 2002, Núm.286, p.4.

<sup>1998</sup> Lipschutz analizó la venta que el Mariscal Soult realizó en Francia de parte de las colecciones adquiridas en el ámbito sevillano. Así el famoso cuadro *La Cocina de los Ángeles* sería adquirido por el Louvre en 1810 por 85.000 francos; en 1835 vendió al duque de Sutherland por 500 francos el *Abraham y los ángeles* y *La vuelta del Hijo Pródigo*, de Murillo y en 1846 vendería el *Cristo curando al paralítico* de Murillo, a George Tomline. (LIPSCHUTZ, 1972, pp.323-324).

<sup>1999</sup> STAMPA PIÑEIRO, Leopoldo *Pólvora, plata y boleros. Memorias de testigos y combatientes en la Guerra de la Independencia*, Marcial Pons Historia, Madrid, 2011, p.340.

<sup>2000</sup> STAMPA PIÑEIRO, L., 2011, pp.408-420.



vendría pareja al proceso de nacionalización política. A pesar de que se ha ido creando una verdadera mitología en torno a la Guerra de la Independencia como génesis de una conciencia nacional a partir de los acontecimientos que dieron lugar al alzamiento de 1802, fue en las Cortes de Cádiz donde verdaderamente se abriría un nuevo escenario político que sustituirá la identidad monárquica como símbolo exclusivo del Estado, y daría lugar a la idea de una nación española, aunque sea solamente todavía entre una minoría. Lo nacional definiría una nueva actitud ante lo español, ante sus manifestaciones culturales primordiales, que comenzarían a configurarse como una identidad propia, no como un ente patrimonial de la Corona sino como simbología de un pueblo que se ha generado en los acontecimientos políticos de principios del siglo XIX. Ha surgido lo que José Álvarez Junco puntualiza: *El patriotismo étnico pasó, pues, a ser plenamente nacional, al menos entre las élites, justamente en el curso de la guerra antinapoleónica; y ello, fue obra indiscutible de los liberales*<sup>2001</sup>. La concepción de la soberanía nacional en el ámbito del constitucionalismo político abre el camino a una gestación pública de lo cultural. Si el poder político se ha ido gestando en el fundamento de un nuevo sujeto político, el pueblo, que participa activamente en la construcción del Estado, se va perfilando una visión pública de lo cultural, donde el pueblo no solamente participa sino que forma parte del mismo. El legado histórico se define en este momento como fundamento de la nación, como sujeto independiente a la Monarquía, que al igual que había fundamentado jurídicamente la institución real, los bienes muebles e inmuebles se nacionalizan culturalmente, y va a sostener al nuevo Estado. El coleccionismo artístico perteneciente a la Corona y los bienes artísticos de la Iglesia se españolizan, formarán parte de la identidad colectiva del pueblo. Su expolio se convierte en un mito nacional, en una pesadumbre popular, que había sido despojado parte de su esencia, y que siempre reivindicaría como bienes perdidos que había que recuperar. Había nacido la conciencia nacional en lo cultural, al mismo tiempo que en lo político.

### **2.1.2. La transformación jurídica de los bienes históricos y artísticos del Patrimonio Monumental en bienes de dominio público: La conversión del Patrimonio Conventual Inmueble en edificios de interés público.**

En los dos años escasos de reinado se promulgaron varias medidas legales de gran trascendencia para el futuro del patrimonio eclesiástico, y que al mismo tiempo recogería la administración liberal con las disposiciones normativas de la desamortización. Una simple lectura de las medidas del rey francés nos llevaría a considerar que con estas disposiciones el monarca francés se adelantaba a las futuras leyes desamortizadoras de los gobiernos liberales que llevó a tan trágico destino a múltiples bienes patrimoniales de

<sup>2001</sup> ALVAREZ JUNCO, José, 1997, p.129.



carácter histórico y artístico<sup>2002</sup>. Sin embargo, con estas medidas José I intentaba plasmar el mismo espíritu reformador que en la Francia bonapartista se había establecido en base al fortalecimiento de la burguesía mediante la nacionalización del patrimonio de los estamentos privilegiados del Antiguo Régimen, que en el caso español terminaría en una verdadera frustración. No cabe duda que se perdieron muchos bienes eclesiásticos en estas disposiciones, pero también cabe sugerir que podemos observar indicios de una cierta preocupación conservacionista, aunque con pretensiones dudosas, que posteriormente recogería la legislación liberal de la España decimonónica, como fue el hecho de fundar un museo bajo la iniciativa real para salvaguardar muchos de los bienes procedentes de las iglesias y conventos expoliados. M<sup>a</sup> José Redondo puntualiza que *a partir de 1809, año en que se decretó la total extinción de los conventos, comenzó una nueva época en la consideración de muchos de nuestros bienes culturales, que dejaron de ser una propiedad particular para convertirse en un patrimonio estatal y se destinaron, bien a constituir parte de la memoria histórica nacional, constituyendo el germen de ciertos conjuntos museísticos, bien a servir de remedio a las acuciantes necesidades de una Administración que se encontraba en una situación de crisis económica. La obra de arte de carácter religioso adoptó así nuevos usos y significados; fue desligada de su antiguo propietario y función y sometida a un proceso de desacralización, perdiendo en gran medida su valor espiritual a favor de la apreciación meramente material, o en el mejor de los casos de la consideración de su mérito artístico (...) La puesta en práctica en la legislación desamortizadora bonapartista exigió la realización de una serie de inventario del patrimonio mueble. La Administración quería conocer con exactitud el número y el valor de los objetos procedentes de los conventos que pasaban a ser de su propiedad. Fue la primera vez que se realizó en nuestro país de forma generalizada –siempre y cuando las circunstancias lo permitieron– y en cumplimiento de las órdenes gubernamentales dictadas a este fin, una labor de inventario de las obras de arte perteneciente al clero regular. La intervención de los laicos en la confección de estas relaciones de objetos artísticos religiosos y en la adopción de decisiones sobre ellos, suponía otra novedad que confirmaba la nueva consideración del bien público y civil que tenían estas obras confiscadas.*

Al poco tiempo después de haber sido proclamado rey en Madrid, José I, con el objetivo de sanear la maltrecha economía hispana promulga el Decreto del 4 de septiembre de 1808, por el que reducía el número de comunidades de

---

<sup>2002</sup> A través de la prensa española del momento se ha podido recoger las principales medidas que José I promulgó en relación a los derribos de iglesias y conventos madrileños para la nueva configuración urbanística, como el del Decreto del 28-XI-1809, que ordenaba la demolición de San Miguel, para la creación de una plaza para la venta de pescado, o los derribos de los conventos de Santa Ana, Mostenses o San Miguel, que darían lugar a derribos de manzanas, todo un conjunto de medidas que se convirtieron en un verdadero precedente para la urbanización decimonónica posterior. Cfr. CALATRAVA, Juan *La arquitectura, el urbanismo y las obras públicas en la prensa de la España Napoleónica en Estudios sobre historiografía de la arquitectura*. Universidad de Granada, 2005, pp.135-139. Sobre los derribos de conventos en esta etapa, a nivel nacional hay una intensa bibliografía, como en el caso de Madrid, cabe destacar RUIZ PALOMEQUE, E. *Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX*. Madrid, 1976.

regulares existentes con la consiguiente incautación de sus bienes. Con el **Decreto del 18 de septiembre de 1809** se suprimirían todas las órdenes religiosas, exceptuando la orden militar de España, que había sido creado en el año anterior. El 21 de octubre del mismo año, se suprimen los conventos de la provincia de Álava que no contaran con un mínimo de doce monjes confesos, confiscándose sus bienes, anunciándose la extensión de tal medida a toda España. El inicio definitivo comenzaría con el decreto que el propio Napoleón **promulgó el 4 de diciembre de 1808** en Madrid (Gaceta de Madrid del 11-XII-1808), por el cual se reducía a una tercera parte el número de conventos en todo el territorio español, confiscándose todos los bienes conventuales incorporados al dominio de España. No se especificaría cuales eran los monasterios que había que suprimir por lo que la selección se podía hacer por motivos diferentes. Unos meses después, a propuesta del Ministerio de Asuntos Eclesiásticos, se creó una Junta presidida por el propio Napoleón para adoptar las medidas pertinentes a la confiscación. A finales de 1808 ya se crearía el cargo de Colector General de Conventos, cuya función sería tomar en posesión los bienes confiscados de las comunidades extinguidas. Como se estipularía en la **Instrucción para la supresión de los conventos de diciembre de 1808**, debía actuar en coordinación con otras autoridades, pues antes de actuar debía de consultar con el prelado diocesano, por si consideraba que la antigua iglesia conventual se convirtiera en diocesana, y con el personero de la localidad, por si quería dar uso público al antiguo edificio conventual confiscado. En caso de que estas propiedades no le interesara ninguna autoridad, eran puestas en venta, previa valoración de tres tasadores y con comunicación al Intendente Provincial. Los bienes muebles quedarían a disposición del Ministerio de Hacienda, excepto las bibliotecas y las obras de arte, de las que se haría cargo el Ministro del Interior<sup>2003</sup>. Con la promulgación del **Decreto de 6 de febrero de 1809** (Gaceta de Madrid de 10-II-1809) se reglamenta las funciones del Ministerio de Asuntos Eclesiásticos sobre el patrimonio incautado. Un paso más en la confiscación de los bienes conventuales supondría la promulgación del **Decreto de 18 de julio de 1809**, procediéndose a la venta de los bienes de las Obras Pías y de los conventos con menos de 12 profeso, de la **Orden del 4 de diciembre de 1808**, donde se reducía un tercio los conventos españoles y se confiscaban los bienes del Santo Oficio, el **Real Decreto del 9 de junio de 1809** estableciendo la venta de los bienes nacionales ya existentes, para el pago de los intereses de la deuda pública y el **Real Decreto del 18 de agosto de 1809**, por el que suprimiría las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales<sup>2004</sup>.

<sup>2003</sup> REDONDO CANTERA, María José “La política bonapartista sobre los bienes artísticos desamortizados del clero regular y su repercusión en un medio provincial: Valladolid, 1808-1813”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Segundo Semestre de 1991, N.73,

<sup>2004</sup> MERCADER RIBA, J. “La desamortización en la España de José Bonaparte” *Hispania*, 122, 1972, pp.587-616.

Una medida paradigmática lo constituiría el **Real Decreto de 23 de agosto de 1809**, por el que se autorizaba a los M.RR. Arzobispos y Obispos para que en las respectivas diócesis puedan disponer se mantengan provisionalmente las iglesias de regulares suprimidas donde creyesen muy conveniente la continuación del culto. En el propio Decreto se apela al uso público de estos bienes inmuebles exclaustros, no con finalidad cultural o de exaltación nacionalista española, sino como bien de valor espiritual, ya que este destino se va considerar un derecho del ciudadano que el Estado no puede. Sería el Ministro de Asuntos de Negocios Eclesiásticos el órgano de autorización de conservación como bienes de interés de culto, entre los que presentarán para tal fin las autoridades eclesiásticas correspondientes de la diócesis, estando obligados a *las razones que los mueven á ellos con respecto á cada una*. En el caso de los bienes muebles de carácter religioso se intentó respetar su función original, como se plasma en el **Real decreto de 6 de setiembre de 1809** mandando que los vasos sagrados, ornamentos, libros de coro y demás efectos propios del culto, que se encuentren en los conventos suprimidos, se aplicarán á las parroquias é iglesias pobres que necesiten de ellos. Nuevamente se estaba dando una prioridad de carácter litúrgico a un supuesto valor histórico y artístico que en principio se le estaba dando a los bienes nacionalizados. Y es que el uso espiritual de estos bienes eclesiásticos desamortizados respondían a una utilidad pública en una sociedad cuyas raíces católicas no habían desaparecidos. Todo un procedimiento administrativo se estableció en orden a adquirir estos bienes, que debían de cumplir los párrocos que los solicitaran, y que debían de autorizar los diocesanos, quien a su vez lo pasaría a los intendentes de las provincias y éstos al Ministro de Negocios Eclesiásticos.

En los últimos años se ha ido desarrollando una amplia bibliografía sobre la desamortización conventual a nivel local en la España Bonapartista que ha sido determinante a la hora de conocer las transformaciones jurídicas sobre la propiedad estamental como su impacto en la pérdida del patrimonio histórico y artístico. En el caso de Madrid, los estudios realizados en los últimos años no dejan dudas de lo que representó<sup>2005</sup>. El caso de Burgos está analizado ampliamente por María Dolores de Antigüedad. Entre las medidas económicas que tomó el Gobierno de José I Bonaparte, la supresión de conventos y la venta de sus bienes se convierten en el eje primordial de su política desamortizadora como había ocurrido en otras ciudades españolas, con el objeto de sufragar la deuda pública y ayuda a pagar los gastos de la ocupación de las tropas invasoras. El 18 de agosto de 1808, el Rey José decretó desde Miranda del Ebro que se procediera a la venta de los bienes de las Obras Pías y de los conventos de menos de doce profesos, a lo que se añadió la

---

<sup>2005</sup> DEL CASTILLO-OLIVARES, M<sup>o</sup> Dolores, *José Bonaparte y el patrimonio artístico de los conventos madrileños*. Tesis Doctoral Universidad Complutense, Madrid, 1987; *El patrimonio artístico de Madrid durante el gobierno intruso (1808-1813)* Uned, Madrid, 1999.

promulgación del decreto del 16 de noviembre de 1808 en el que se suprimía un amplio número de conventos burgaleses<sup>2006</sup>. Las propiedades de los conventos, casas y fincas convertidas en Bienes Nacionales pasarían al Estado que las pondría en venta. Las obras de arte y las bibliotecas de los conventos suprimidos fueron inventariados y recogidos en un depósito, para lo que se nombró como encargado de la custodia de los bienes a Cesar Gutiérrez de Arce, que iría reuniendo en el ex convento de San Jerónimo los cuadros y bibliotecas de las casas enajenadas. El problema comienza en el momento en que unos bienes considerados nacionales van a ser adquiridos por un militar francés, el General Vizconde de Darmagnac, notable representante del ejército de Napoleón, y puede ejemplificar la actitud que muchos como él adoptaron en este momento sobre los bienes desamortizados. Conocemos por el estudio de María Dolores Antigüedad las controversias que va a tener Gutiérrez de Arce con el general francés, quien había intentado recoger la biblioteca y las pinturas que había en la Cartuja de Miraflores. Después de una serie de vicisitudes el general terminaría adquiriendo los cuadros, lo que prueba las dificultades que va a presentarse el gobierno josefino a la hora de configurar una verdadera institucionalización administrativa de protección monumental<sup>2007</sup>. El caso de

<sup>2006</sup> ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M<sup>a</sup> Dolores, “Arte y coleccionismo en Burgos durante la ocupación francesa” *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie VII, H<sup>a</sup> del Arte, t.2, 1989, pp.329-331. Entre los conventos masculinos suprimidos estarían los Benedictinos de San Juan, Benedictinos de San Pedro de Cardeña; los Cartujos de Miraflores; los Jerónimos de Fres del Val; los Jerónimos de San Juan de Ortega, el de Canónigos Premonstratenses de San Cristóbal de Ibens, el de Agustinos Calzados, el de Trinitarios Calzados, el de Dominicos de San Pablo, el de Franciscanos Observantes de San Francisco de Paula, el de Carmelitas Descalzos, el que estaba ya abandonado de Franciscanos Descalzos de San Pedro Alcántara y el de Mercedarios Calzados. Entre los conventos femeninos fueron suprimidos el convento de las Comendadoras de Calatrava, el de Benedictinas de San José, las Bernardas de San Bernardo, el de Agustinas Observantes, el de Agustinas Canonisas de San Idelfonso, el de Franciscas de Santa Clara, el de Franciscas de San Luis, el de Trinitarias, el de Carmelitas Descalzas y el de Franciscas de Vivar del Cid. En total 29 casas religiosas de la ciudad de Burgos y de sus alrededores.

<sup>2007</sup> El relato de los hechos lo expone claramente M<sup>a</sup> Dolores Antigüedad, constituyendo un buen testimonio de lo que ocurrió en un gran número de poblaciones españolas bajo la invasión francesa: *Gutiérrez de Arce escribe el 25 de enero de 1809 al Ministerio del Interior exponiéndoles las dificultades que habían surgido entre él y el general Vizconde de Darmagnac. El General había confiscado los bienes impidiéndole entrar en la Cartuja basándose en el hecho de que la había comprado y él mismo se ocuparía de su custodia. Arce por su parte opinaba que en la compra no se incluía los muebles y las pinturas. La carta continuaba relatando que el General había sacado del depósito de San Jerónimo nueve cuadros sin darles recibo por ellos, condición bajo la que se le había concedido días antes. La respuesta del general francés al reclamarle el recibo fue intimar a Arce para que le entregara más cuadros y amenazarle desde su condición de Gobernador Militar; el resultado fue que Arce tuvo que entregarle cinco cuadros más del depósito de San Jerónimo mediante el recibo justificativo pero sin recibir el de los nueve anteriormente sacados. El General basaba su negativa en que había enviado muchos más cuadros a San Jerónimo, pero Arce argumentaban que eran lienzos y láminas sin valor tomados de la parroquia que estaba en el castillo. El propósito de Arce con esta carta era justificarse ante el Ministerio salvando su responsabilidad en estos hechos a causa de las amenazas del General, a la vez que enviaba la lista de los catorce cuadros tomados por Darmagnac y solicitaba las órdenes oportunas al respecto (...) El 2 de febrero, el Ministro del Interior escribía a Gutiérrez Arce que había quedado enterado del hecho de que el General Darmagnac, había extraído cuadros y pinturas*

Sevilla también es de consideración. Una de las primeras medidas que establecería el nuevo gobierno sería la abolición del clero regular, a raíz de las promulgaciones de los Reales Decretos de 19 y 21 de agosto de 1809. En el caso de Sevilla, como apunta Manuel Moreno, *una de las ciudades más levítica de España, superpoblada de frailes, se vio totalmente desalojada de estos, antes incluso de que se aplicaran las medidas de supresión de regulares conforme a lo dispuesto por la administración josefina (...)*. Así a fines de febrero de 1810, el Prefecto Blas de Aranza haría público el llamado *Plan o método con que debe procederse a la extinción de los frailes y secuestro de sus bienes*, por el que debía procederse a la extinción de los frailes y secuestro de sus bienes, por lo que en un plazo de quince días tenían que salir de sus conventos y vestir los hábitos clericales seculares. El desalojo de los conventos sin duda afectaría a la fisonomía de la ciudad, procediéndose inmediatamente a la venta de los bienes, con destino a los bienes nacionales, en virtud del Decreto de 21 de abril de 1810, publicada en la *Gazeta Extraordinaria de Sevilla*, con el título *Distribución de los bienes nacionales del Arzobispado de Sevilla*. Sus grandes colecciones de bienes muebles fueron presa del pillaje y los bienes inmuebles fueron dañados, como el incendio que se produjo en el convento de San Francisco. A nivel provincial, cabe mencionar el estudio de la Osuna Napoleónica de Francisco Díaz Torrejón, que ejemplifica la proyección del sistema administrativo napoleónico en los ámbitos locales<sup>2008</sup>.

Gracias al *Diario*<sup>2009</sup> de Félix González de León conocemos el destino que tuvieron en estos años un gran número de conventos masculinos y femeninos al convertirse en cuarteles. El nuevo gobierno francés dictaría un gran número de órdenes, tanto para evacuar a los inmuebles de sus moradores, como para adaptar a los edificios para su uso militar. Ya en el primer día de la llegada de las tropas francesas, como plasmó el cronista sevillano, se ubicaron en un gran número de conventos, expulsando a los religiosos que todavía habían permanecido en sus centros. El nuevo Gobernador Militar dispondría la *Orden para el alojamiento de militares franceses en Sevilla* en fecha de 5 de febrero de 1810. De esta manera un gran número de conventos serían ocupados por las tropas francesas, perdiéndose en cierto modo en muchos casos su fisonomía original. Gracias al estudio de Manuel Moreno se conoce el personal alojado en los Conventos hacia 1810, que da una idea del gran número de soldados y personal que se fueron ubicando en los distintos conventos

---

de la Cartuja y del Colegio de San Jerónimo, pero no le transmitía orden alguna al respecto ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO, 1989, pp.331-333.

<sup>2008</sup> DÍAZ TORREJÓN, Francisco L. *Osuna Napoleónica (1810-1812) Una villa andaluza y su distrito durante la ocupación francesa*, Fundación Genesian, Sevilla, 2001.

<sup>2009</sup> GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix *Diario de las ocurrencias públicas y sucesos históricos y curiosos, ordinarios y extraordinarios, así eclesiásticos, religiosos y sagrados, como seculares, políticos y profanos, acaecidos en esta ciudad de Sevilla en todos y cada uno de los días de 1800, en que da comienzos, y se prolonga hasta 1847*.



sevillanos<sup>2010</sup>. Curiosamente, Félix Gonzalo de León precisa que los franceses *no se metieron con las monjas*, aunque como veremos posteriormente fue derribado el de la Encarnación y expulsado otra comunidad. Entre los conventos masculinos que serían utilizados como centros militares estarían los de San Francisco, Santo Tomás, el Carmen, San Agustín, la Merced, San Basilio, San Antonio, San Benito de la Calzada, la Victoria y San Jacinto. Sabemos por los cronistas de la época que las pérdidas patrimoniales en algunos de estos casos fueron muy relevantes, por lo que recoge M<sup>a</sup> Luisa Fraga, van a existir quejas sobre el mal uso que se ha hecho en algunas ocasiones de los inmuebles conventuales.

### **2.1.3. La génesis del Museo Josefino como destino de los bienes muebles nacionalizados del Patrimonio eclesiástico y real: el Decreto de 20 de diciembre de 1809.**

Con la promulgación del **Decreto del 20 de diciembre de 1809** nace el Museo Josefino, con el objetivo primordial de dar a conocer la pintura española que estaba encerrada en las paredes de los interiores de los conventos, como así aparece reflejada en el artículo I: *Se fundará en Madrid un Museo de Pintura, que contendrá las colecciones de diversas escuelas*, por lo que se supera la concepción hegemónica de un estilo artístico. La idea está inspirada claramente en el espíritu de la Ilustración, como así se expresa en el Preámbulo del Decreto Fundacional del Museo publicado el 21 de diciembre de 1809 en la Gaceta de Madrid: *Queriendo en beneficio de las bellas artes, disponer de la multitud de quadros, que separados de la vida de los conocedores, se hallan hasta aquí encerrados en los claustros, que estas muestras de las obras antiguas más perfectas sirvan como los primeros modelos y guías a los talentos; que brille el mérito de los célebres pintores españoles, pocos conocidos de las naciones vecinas, procurándoles al propio tiempo la gloria inmortal que merecen tan justamente los nombres de Velázquez, Ribera, Murillo, Rivalta, Navarrete, Juan de San Vicente (es decir, Juan de Juanes y otros). A los bienes conventuales se uniría en la confección de la colección del nuevo museo las colecciones reales e incluso privadas, como la de Nicolás de Azara. Desde su inicio, José Bonaparte tenía claro de crear un museo nacional, donde se expresara los fundamentos de la cultura española, por lo que incluso tuvo que enfrentarse a su propio hermano al querer llevarse a París una parte de la colección que había obtenido<sup>2011</sup>. Al mismo tiempo se ha*

<sup>2010</sup> MORENO ALONSO, Manuel *Sevilla Napoleónica* Sevilla, 1995, p.54. En esta fecha el personal estaba recogido en los siguientes conventos: Convento de San Agustín, 200 soldados de Artillería; Trinidad, 73 con equipajes de carros; San Benito, 190 de Artillería; San José, 80 voluntarios del Guadalquivir; San Francisco, vacío; La Merced, 100; San Basilio, 32; del Carmen, vacío; San Jacinto, 350 suizos; Santo Tomás, 200 trabajadores de Artillería; San Francisco de Paula, 80 ingenieros; San Pedro de Alcántara, 80.

<sup>2011</sup> En el decreto se establecía que la formación de *una colección general de los Pintores celebres de la escuela española, la que ofreceremos a nuestro augusto Hermano el Emperador de los franceses, manifestándole al propio tiempo nuestros deseos de verla colocada en una de*



creado un museo claramente de concepción pública, siguiendo el modelo que desde la Francia revolucionaria se ha ido exportando a otros países como Italia, Bélgica, Alemania o Polonia. En el artículo I se precisa que los bienes históricos-artísticos y *á este efecto se tomará de todos los establecimientos públicos, y aun de nuestros palacios, los quadros necesarios para completar la reunión que hemos decretado*. Se ha hecho claramente entre los bienes en manos de las instituciones públicas y del coleccionismo privado, al referirse a los palacios reales que estaban situados. La selección y recogidas de los bienes muebles estarían a cargo de instituciones gubernamentales como eran los *Ministros del Interior y de la Hacienda*, junto con *el superintendente general de la real casa*, quienes *tomarán, de acuerdo, las providencias convenientes para la ejecución de este decreto* (artículo IV del Decreto). Al mismo tiempo se va a nombrar un personal administrativo que se encargue de los bienes confiscados<sup>2012</sup>, como una Comisión de eruditos con la finalidad de escoger *entre todos los quadros, de que podemos disponer, los que se juzgaran necesarios para adornar los palacios que se destinen a las Cortes y el Senado* (artículo III del Decreto). Se escogería un edificio donde albergar inicialmente en depósito los fondos requisados, siendo el Alcázar de Sevilla, en donde se reunieron mil cuadros, el Escorial, Toledo y el convento del Rosario en Madrid, que se convertiría en el depósito mayor del Reino. Al final se situarían definitivamente en el Palacio de Buenavista, un edificio recién construido en 1777, que había sido destinado como residencia de los Duques de Alba y que posteriormente fue regalado por la corporación municipal a Godoy<sup>2013</sup>.

El proyecto de José I queda juzgado por la historiadora del arte María de los Santos García Felguera: *No sabemos si en alguna medida el decreto respondía a las presiones de sus súbditos, y es probable que sí, pero también resulta muy coherente con los propios planteamientos y preocupaciones del monarca. Un buen rey, que queriendo en beneficio de las bellas artes, disponer de la multitud de cuadros que, separados de la vista de los conocedores (...) tenía entre sus proyectos más queridos formar en la Corte un Museo de Pinturas que hiciera brillar el mérito de los célebres españoles. La de José I era una actitud ilustrada, incluso patriótica,*

---

*las salas del Museo de Napoleón, en donde, siendo un monumento a la gloria de los artistas españoles, servirá como prenda de la unión más sincera de las dos naciones* (Art.II).

<sup>2012</sup>. En el caso de Andalucía sería nombrado a un personaje singular Fréderiet Quilliet, un comerciante francés asentado en Cádiz, que se dedicó al comercio de objetos de lujo, y que se encargaría de inventariar y recoger obras de arte para mandarlas a la Corte del Rey José, por lo que sería autorizado por el Monarca para recoger todos los quadros, pinturas, estatuas, y demás objetos de arte que se encontraran en los conventos suprimidos, o de lo que pueda disponer el Gobierno. El 17 de enero de 1810, el Marqués de Almenara, Ministro del Interior lo nombra asesor artístico del ejército en Andalucía. Se conoce una Orden de 23 de septiembre de 1810 donde se establece que se hiciera una lista de cincuenta cuadros para regalar a Francia. Sin embargo, pronto sería denunciado por las actividades defraudadoras que realizó sobre el Patrimonio Monumental, por lo que el 21 de julio de 1810, el Rey prescindió de sus servicios. LASSO DE LA VEGA, M. *Mr. Frederic Quilliet, Comisario de Bellas Artes del Gobierno Intruso (1809-1841)*, Madrid, 1933.

<sup>2013</sup> BOLAÑO, María *Historia de los Museos en España*, Editorial Trea, Gijón, 2008, 2ª edición, pp.161.

*aunque viniera de un invasor y encajaba en la política museológica del Imperio, que dio origen a colecciones públicas de la altura de la galería Brera, el Rijksmuseum o los Museos Reales de Bruselas (...) Esta política respondía a un doble interés: por un lado dotar a la nación de una institución útil y necesaria de la que carecía; pero por otro garantizar la conservación de un importante patrimonio artístico cuyo futuro hubiera sido menos incierto, al producirse la supresión de los conventos en 1809<sup>2014</sup>.*

En opinión de Leopoldo Stampa siguiendo la línea de Gaya Nuño, con el proyecto del Museo Josefino se iniciaba lo que calificaría como el saqueo institucional. Del análisis de las disposiciones podemos sacar algunos puntos vitales a la hora de contemplar la confección de una colección pública que ni más ni menos van a significar la fundación del Museo Josefino y los otros centros museísticos provinciales:

1º) Con la configuración de los museos nacionales bajo los auspicios de la Monarquía se está produciendo un se está produciendo un hecho importante, que va a dar lugar a una verdadera génesis de la concienciación patrimonial en España: la formulación de la existencia de un verdadero patrimonio nacional, que sea identificable en la identidad de la comunidad, que hasta este momento había quedado en las colecciones regias y de la alta nobleza. Este sería sin duda alguna el verdadero objetivo de la creación del museo josefino, que en cierta manera estaba emulando a los museos creados al amparo de las ideas de la Revolución.

2º) Sin duda alguna se ha producido una confiscación en los bienes muebles e inmuebles de numerosas congregaciones religiosas, pero no se tratará de una práctica exclusiva realizada en el solar hispano, sino que simplemente se ha producido las mismas prácticas desamortizadoras que se han dado en la Francia Revolucionaria, y que han sido ajena en España al no haber vivido dicho proceso político. El traslado del Patrimonio Eclesiástico y Monárquico a un inmueble para confeccionar un museo de bienes de claro valor estético e histórico los convierte en bienes nacionales y al mismo tiempo en bienes participante de la conciencia cultural de la comunidad. No cabe duda que en muchos casos van a ocurrir auténticos expolios de las colecciones de las instituciones desamortizadas, pero se habrá producido un paso importante en la concienciación patrimonial española.

3º) La configuración del Museo Público como institución tutelada por el Estado va a producir un hecho trascendental en el ámbito del coleccionismo español. El coleccionismo regio propio del absolutismo monárquico en la que la propiedad de los bienes pertenecen a la Corona a pesar de la simbología nacional que le corresponde pasa ahora a un coleccionismo estatal en que el Estado será el verdadero propietario, aunque de hecho lo fuera José I Bonaparte. Al mismo tiempo los bienes históricos-artísticos depositados en

<sup>2014</sup> GARCÍA FELGUERA, María de los Santos, *Viajeros, eruditos y artistas. Los europeos ante la pintura española del siglo de Oro*. Alianza Forma, Madrid, 1991, pp.49-51.

estos museos han transformados su identidad, al perder la esencia de la finalidad que envolvían su origen, se ha producido el mismo fenómeno que años atrás había ocurrido en el proceso revolucionario francés, han dejado de ser bienes de interés espiritual o de exaltación monárquica para convertirse en bienes nacionales que identifiquen la identidad de la comunidad política a la que representan. Sin embargo, a pesar de esta intención proteccionista de la monarquía bonapartista, el proyecto fracasó, ya que algunas obras serían vendidas en subasta pública, otras pasarían a las colecciones privadas de los generales napoleónicos y las mejores, seleccionadas por Francisco de Goya, Mariano Maella y Manuel Napoli, serían enviadas a Francia para engrosar el nuevo Museo de Francia, y lo que fue peor, las pretensiones del propio Emperador que quería que fuera llevado a París una selección de estas obras, para el llamado Museo Napoleón, cuya selección de cincuenta obras lo realizaría en 1809 los pintores Maella, Goya y Napoli, hecho que ha llenado de polémica la actitud del pintor aragonés y ha culminado en un verdadero debate historiográfico, a lo que hay que resaltar que solo llegarían seis cuadros en 1813 a la capital francesa<sup>2015</sup>.

Desde otra perspectiva, cabe señalar la oposición que mostraron algunas instituciones eclesiásticas, como los Cabildos Catedralicios, a la hora de ser despojados de algunas obras de reconocido prestigio para ser llevados al museo madrileño. Un caso digno de mencionar estudiado por M<sup>o</sup> Dolores Antigüedad es el pleito llevado a cabo por el Cabildo de la Catedral de Granada contra el Intendente nombrado por Rey, por lo que en todo momento se mostraron reacios a la medida real<sup>2016</sup>. La oposición de la Catedral no dejó en a la autoridad competente, por lo que el 21 de agosto el Ministerio del Interior autorizó al Comisionado Aguilar para que se trasladase al depósito general de la Cartuja las pinturas de fácil transporte de la Catedral. Ante tales

---

<sup>2015</sup> Sobre el destino de los cuadros españoles enviados a París, GARCIA FELGUERA, María de los Santos, *Viajeros, eruditos y artistas. Los europeos ante la pintura española del Siglo de Oro*. Madrid, 1991, pp.56-57; TAYLOR, Francis Henri, *Artistas, príncipes y mercaderes*, Barcelona, 1960, p.554.

<sup>2016</sup> El 14 de abril de 1810 los representantes del cabildo de la Catedral granadina dirigen un oficio al Intendente de la Corona y encargado de los monumentos artísticos, Francisco Aguilar, en el que pedían la supresión de la orden de recogida de pinturas, exponiendo la inconveniencia de remitir los cuadros que se solicitaban de la Catedral para formar parte del Museo, aun reconociendo la utilidad de reunir los modelos de la nobles artes; pues ello sería afeear, empobrecer, desfigurar y desconcertar la armonía de tan admirable templo, tanto más que cuanto que permaneciendo estas obras en sus lugares de origen ya constituía un museo religioso donde podía gozarse por los naturales y forasteros con más proporción que en otra parte alguna. El 15 de abril el Comisario Regio en Granada, Andrés Romero Valdés, respondió al Cabildo que podrían conservar en sus lugares las pinturas que el profesor designado al efecto considerase de difícil transporte, mientras que las pequeñas y las pertenecientes a Bienes Nacionales (las enajenadas por el Decreto del 18 de julio de 1809) pasarían a ocupar los depósitos que se habían establecidos para el almacenamiento. El 16 de abril. Francisco Aguilar, comunica que al Comisario Regio que siguiendo sus ordenes ha encargado al Comisionado José García, que haga inventario de las pinturas de difícil traslado de la Catedral (...). El 28 de abril se firma la relación de pinturas y esculturas de difícil transporte y poco conveniente de desglosar de la Catedral. ANTIGÜEDAD, M<sup>o</sup> Dolores, 1988, p.270.

pretensiones, el Cabildo Catedralicio enviaría una carta al Rey el 8 de septiembre, exponiendo la magnificencia del inmueble y de las obras que contiene por lo que su envío a Madrid arruinaría<sup>2017</sup>. El 19 de septiembre Aguilar enviaría al Ministro del Interior del expediente del contencioso mantenido con el Cabildo Catedralicio, exponiendo las dificultades que estaba teniendo a la hora de ejecutar la disposición. El 30 de septiembre de 1810 nuevamente el Cabildo Catedralicio volvería a enviar una carta al Monarca prácticamente en los mismos términos que la anterior, precisando que el Real Decreto solo comprendía a los conventos suprimidos y no a las iglesias abiertas al culto. Aunque la falta de documentación abre una laguna importante de los hechos, nos lleva a pensar que la enajenación de los cuadros de la Catedral no se terminaría de hacer.

El Museo de Madrid no fue el único que se proyectó hacer durante la etapa bonapartista. Siguiendo el mismo modelo se fueron fundando otros museos en algunas provincias. En Barcelona el general Duhesme encarga al pintor neoclásico Flaugier la formación de un museo con los fondos religiosos, para ser instalado en la Escuela de Nobles de Arte de la Junta de Comercio de Barcelona. En Andalucía se fundarían varios centros museísticos. Así en los primeros meses de 1810, en una campaña militar para someter a las provincias andaluzas, se decreta el 11 de febrero del referido año en Sevilla que se reúnan todos los *monumentos más bellos de la ciudad en el Alcázar de Sevilla: De las Salas de nuestro Real Alcázar se tomarán cuantas sean necesarias para que se coloquen los monumentos de arquitectura, las medallas y las pinturas, y su escuela, que ha de ser conocida por la Sevillana*<sup>2018</sup>. Como recoge Manuel Moreno Alonso, la Gazeta de Sevilla anunciaría como S.M. estaba satisfecho por se estaba poniendo en marcha el proyecto de protección de las obras de artes. El Alcázar se convirtió en un verdadero depósito de obras de artes para intentar salvaguardarlas de su pérdida, el mayor de toda la Península, que llegaría a albergar 999 cuadros en 39 salas, según consta en el Inventario de Gómez Imáz, pudiéndose ser admirada por el monarca francés, quien pudo deleitarse de algunas de las grandes composiciones de la escuela sevillana que procedían

<sup>2017</sup> El contenido de la carta es el siguiente: *El Cabildo venera profundamente los decretos de V.M. y se aprecia de que otro ninguno le aventaja en todo el Reyno a prestarse gustoso, y sumiso a quanto sabe que es de su Real agrado; pero creyendo con grave fundamento que á esta Orden del Ministro del Interior puede haver dado causa algún equivocado concepto (...) que de extraerle la multitud de pinturas y esculturas que pide Don Francisco Aguilar es afearlo, empobrecerlo, desfigurarle, desconcertar la armonía de sus Altares y Capillas, arrancar de la vista del Pueblo los objetos más venerables de su devoción, y su culto, sin que para ello sea bastante razón la de proporcionarle de un museo civil, quando permaneciendo estas obras de arte en los lugares, que tanto tiempo han adornado, tienen en ellas un museo religioso que lo consuela, y donde luce, y se dejan gozar de naturales y forasteros, con más proporción que en otra parte alguna.* ANTIGÜEDAD, M<sup>a</sup> Dolores, 1988, p.274.

<sup>2018</sup> Gaceta de Madrid, 24 de febrero de 1810. La recopilación de los más importantes decretos del Gobierno de José I están recogidos en *Prontuario de las leyes y decretos, del Rey Nuestro S. D. José Napoleón desde el año de 1808*. Madrid, 1810, tres volúmenes.

de la exclaustación de varios conventos<sup>2019</sup>. De este modo se fundaría una galería en el cuarto bajo, que se abriría al público los domingos y días festivos. El periódico local en fecha de 26 de agosto de 21 de abril de 1810 recogía la noticia en los siguientes términos: *Así los andaluces gozarán de la admiración que los extranjeros podrán menos de manifestar por los pintores de la escuela de Sevilla; ojalá que la admiración, tan justamente prodigada a estos antiguos maestros, pueda hacer renacer el amor a un arte tan noble y tan propio para excitar la imaginación ardiente de los habitantes del Betis*. En Granada, el Monarca vuelve a tener la misma idea de crear un Museo, descrita en la Gaceta de Madrid del 26 de abril: *En medio de los grandes asuntos que ocupan principalmente al gobierno, extiende sus miras a otros objetos que contribuyan a la felicidad y lustre de la nación. Trata de formar un museo en que el público tenga para su curiosidad e instrucción los mejores modelos de las nobles artes. Igualmente, trata de una escogida biblioteca pública; habiendo ya nombrado para tan útiles establecimientos algunas personas de esta capital distinguidas por su ilustración y patriotismo*. A los depósitos andaluces se unirían los situados en el convento del Rosario de Madrid, que posteriormente se trasladaría a la Real Academia de San Fernando, en el Monasterio del Escorial y en la Lonja de Barcelona, que terminarían siendo expoliadas la mayoría de sus colecciones. Así el Monasterio del Escorial sufriría varias expoliaciones por parte de las tropas francesas, como las del 3 de diciembre de 1808, en 1809, el 7 de enero de 1810, a lo que se uniría otros importantes centros monásticos, como fue el caso del de Guadalupe, durante la campaña del mes de mayo de 1809, o el propio Monasterio de Rocenvalles<sup>2020</sup>.

No solamente sería los lienzos los solicitados por los franceses sino que se decretaron varias disposiciones para recoger aquellos sepulcros de reyes y nobles, que se consideraban de valor histórico y artístico, como fue el **Real decreto del 9 de marzo de 1809**, por el que se ordenaba el traslado de los enterramientos de reyes y personajes de los conventos suprimidos de Burgos a la iglesia metropolitana, y los que estuvieran ubicados en otros pueblos se recogerían en la iglesia que quedase en cada localidad: *los demás monumentos de personas menos ilustres o de desconocidos, que merezcan conservarse para la historia de las artes, se recogerán, depositando sus cenizas en otra iglesia, a fin de reunirlos en esta corte en el museo que se ha de formar de objetos relativos a ellas para utilidad de sus profesores, todos ellos encaminados a conseguir el adelantamiento de las artes*. En la misma línea se inserta el decreto de 21 de junio de 1810 que ordenaba conservar los monumentos sepulcrales de hombres ilustres, insignes y muy célebres en las bellas artes en la catedral o iglesia principal de cada lugar<sup>2021</sup>.

---

<sup>2019</sup> FERRIN; Rocío *El Alcázar de Sevilla en la Guerra de la Independencia. El Museo Napoleónico*, Sevilla, 2009.

<sup>2020</sup> STAMPA PIÑEIRO, Leopoldo, 2011, pp.303-305.

<sup>2021</sup> ANTIGÜEDAD, M<sup>a</sup> Dolores, La primera colección pública en España: el museo josefino. *Fragmentos, revista de arte*. N<sup>o</sup> 11, p.71.



#### 2.1.4. Algunas disposiciones sobre prohibición de exportación de los bienes conventuales: El Real Decreto de 1 de agosto de 1810.

La reacción de las órdenes religiosas ante el despojo que se estaba cometiendo en sus inmuebles va a llevar a ocultar muchos de ellos, como fue el caso de los Capuchinos de Sevilla, especialmente la colección de los Murillos, o de venderlos, bien en un mercado fraudulento interior o incluso al extranjero. Manuel de Napoli se quejaría al Ministro del Interior, Almenara, de que las monjas habían vendido parte de sus colecciones pictóricas al extranjero con la consiguiente pérdida que significó para el Patrimonio Nacional: *Mucho le a perjudicado al establecimiento la indiferencia e indulgencia que se ha usado a las Señoras Monjas, haciéndolas vender las pinturas que tenían en lo Interior de los Conventos de modo que todo aficionado, así Nacional como extranjero, han llenado sus casas y transportado, fuera del Reino pinturas por poco dinero y el Museo carece de preciosidades*<sup>2022</sup>. De esta forma el **1 de agosto de 1810**, un decreto prohibiría la exportación de cuadros y pinturas bajo la pena de confiscación y de una multa igual al valor de los objetos, repartiéndose el importe *por terceras partes entre el delator, el aprehensor, y el hospital más inmediato, o por mitad, no habiendo delator*. En caso de reincidencia la multa sería doble(art.1). Al mismo tiempo se va a establecer la responsabilidad individual *con su persona y bienes*, de aquellos pertenecientes a *qualquiera corporación poseedora de quadros y pinturas, los que habitan en edificios públicos en que se hallan estos objetos, y especialmente los que tienen la inspección de ellos* (art.2). En la administración patrimonial monumental se irá incorporando los Ministerios del Interior y de Hacienda, que posteriormente continuará la administración liberal<sup>2023</sup>. A pesar de la publicación de este Real Decreto, dos semanas después el Mariscal Soult obtendría licencia para exportar seis lienzos, cuatro de Tiziano, Van Dyck, Reni y Piombo, que había sido regalado por el Rey, y otros dos realizado por Navarrete y Ribera, aunque también hay que anotar que no tuvo autorización para llevarse otros quince, aunque intento solventar todo obstáculo jurídico constando que eran imitaciones, aunque estaba fuera de toda realidad. Curiosamente como señala Leopoldo Stampa, muchos generales franceses aludieron que esta disposición era exclusivamente dirigida a los marchantes que se dedicaban al mercado lucrativo, como así hizo el general Sebastiani, recibiendo el permiso solicitado el 10 de julio de 1810 para sacar del país un Tiziano, un Bordone y un Van Dyck<sup>2024</sup>.

#### 2.1.5. La configuración inicial del espacio público en la España josefina: el urbanismo josefino.

<sup>2022</sup> VIGNAU, VICENTE “Manuel Napoli y la colección de cuadros del ex convento del Rosario” en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tomo IX, noviembre de 1903, pp.372-376; tomo XI, agosto, 1904, pp.192-199; Tomo XII, febrero, 1905, pp.152-156.

<sup>2023</sup> ANTIGÜEDAD, M.D., 2011, p.166-167.

<sup>2024</sup> STAMPA PIÑEIRO, L., 2011, p.327.



El modelo de ciudad burguesa que José I Bonaparte va a intentar implantar en el solar hispano sustituyendo a las ciudades barrocas del corte absolutista va a ser determinante no solamente como ensayo de futuras actuaciones de los gobiernos liberales a lo largo del siglo XIX, sino que a su vez significó en algunos casos la pérdida de algunos tejidos urbanos de carácter histórico, especialmente perteneciente al patrimonio religioso<sup>2025</sup>. Los distintos ordenamientos urbanos dictados por el Monarca Francés y aparecido en la Gaceta de Madrid le ayudarían a transmitir la imagen de un gobernante ilustrado que buscaba la beneficencia pública a sus ciudadanos. Hasta cierto punto nos encontramos en estas medidas un avance importante en la política de expropiación urbanística, a la hora de demoler inmuebles de carácter privado, que no solamente pertenecieron al patrimonio eclesiástico, especialmente iglesias y conventos, sino que también sufrieron dichas medidas algunos particulares. El principio de la utilidad pública, especialmente reflejada en los correspondientes a la higiene y a la expansión urbana, primaría sobre la concepción patrimonialista de algunos inmuebles que fueron derribados. En cierta manera estaba poniendo en práctica en el solar hispano algunos planes que se habían proyectados en la propia Francia napoleónica, y que en cierta forma eran herederas del ideario de los ilustrados.

Uno de los ejemplos significativo de la política urbanística llevada a cabo por José Bonaparte en España sería las que se proyectaron para ciudad de Madrid<sup>2026</sup>, aunque muchas de ellas cabe decir quedaron sin ejecutar. Uno de los decretos que mejor refleja la política urbanística del monarca sería la del 9-V-1809, en la que se la establecía la concesión de la Villa de Madrid de una parte del Retiro para formar en ella un paseo público, incluso se ofrecía la noticia de que se iba a efectuar la apertura al público de este paseo. La demolición de conventos para la configuración de plazas y mercados vendría pronto, así el Decreto del 28-XI-1809 ordenaba la demolición de la iglesia de San Miguel y de las zonas adyacentes, que habían sido dañadas por el incendio de la plaza mayor, con el objetivo de delimitar una plaza para la venta de pescado, justificado por los principios higiénicos que superpondrían a la conservación del Patrimonio Urbano, que se convierten en obstáculos para la delimitación del espacio público de la ciudad burguesa<sup>2027</sup>. El proyecto de una amplia plaza junto a la Plaza Real a raíz del decreto de 29-V-1812 nos sitúa ante las pretensiones urbanísticas del nuevo régimen. Ni más ni menos se

---

<sup>2025</sup> SAMBRICIO, Carlos “De la ciudad ilustrada a la ciudad liberal” en *Ilustración y liberalismo 1788-1814*. Catálogo de la exposición celebrada en Madrid en el Palacio Real octubre 2008/enero 2009, Madrid, 2008, pp. 343-345.

<sup>2026</sup> SAMBRICIO, Carlos, Territorio y ciudad en la España de la Ilustración, Madrid, 1991, 2 vols, cap.8. *Territorio y ciudad en la España Napoleónica*, Vol. 1, pp.567-601; RUIZ PALOMEQUE, Eulalia *Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX*, Madrid, 1976.

<sup>2027</sup> CALATRAVA, Juan *La arquitectura, el urbanismo y las obras públicas en la prensa de la España Napoleónica*, Estudios sobre historiografía de la arquitectura, Universidad de Granada, 2005, pp. 139-142.

estaba articulando la futura Plaza de Oriente, que quedaría en papel mojado por el abandono definitivo de la ciudad por parte del rey José I<sup>2028</sup>. La llegada del francés en Granada dejó una amplia huella en lo referente al plano urbanístico, no dejando indiferente a la historiografía contemporánea como a los cronistas del momento las transformaciones que fueron acometidas en aras a delimitarla como una ciudad moderna. La preocupación por conservación de La Alhambra va a marcar ya el inicio de la política josefina en Granada, como se puede apreciar en el Decreto de 20 de marzo de 1810<sup>2029</sup>. El proyecto del Gran Salón se convierte en uno de los más ambiciosos de los que se van a realizar en la España Josefina. Con estas medidas urbanísticas la pérdida de inmuebles históricos pertenecientes al Patrimonio Monumental sería un hecho. Así entre 1811 y 1812 serían derribadas las iglesias y convento del Angel Custodio y la de San Francisco, las torres de San Jerónimo y del Aceituno, la Puerta de Bitauvin.

Con José I asistimos a los primeros pasos de la transformación urbanística que se va a producir en Sevilla y que será constante durante todo el siglo, muchas veces audaces como no de acertadas. Fue el propio rey quien impulsó el proyecto para convertir Sevilla en una *grande ville*, abriendo espacios libres en el entramado laberíntico de la ciudad. Ya Santiago Montoto apuntaba que estas actuaciones en la ciudad se harían con *el deseo de transformar la capital andaluza en una población de corte europeo*. La historiografía más moderna siguió elogiando las actuaciones del gobierno francés, como el caso de José Manuel Suárez Garmendia, quien llega a afirmar *que este conjunto de modificaciones urbanísticas son la nota más positiva del balance de la ocupación francesa, que tan negativamente ha pretendido presentarnos la historiografía tradicional aferrada a las corrientes nacionalistas propias del siglo XIX*<sup>2030</sup>. No obstante, existe todavía alguna corriente historiográfica que, siguiendo la tradición decimonónica, como es el caso de María Luisa Fraga, que considera que significó en algunos casos una grave pérdida patrimonial. Las medidas adoptadas por el gobierno francés se deben de abordar en el contexto cultural de la época, en principio marcado por una política anticlerical, vista con buenos ojos por amplios sectores de la población, y por otro lado, por el proceso de modernización que se había ya iniciado en algunas capitales francesas. Siguiendo el Plan de Reformas de París del conde Waylly, y teniendo como precedente español las medidas adoptadas en Madrid, con derribos conventuales para abrir espacios urbanos, se

<sup>2028</sup> Aunque el decreto de demolición de las manzanas 431, 432 y 433 se terminaron ejecutando, no se pudo realizar la plaza delante del Palacio Real propuesta por el decreto de 29 de mayo de 1812, por el que se había convocado un concurso para la construcción y adorno de la plaza resultante de los derribos de los inmuebles. Esta operación formaba parte de la idea de unir en un solo eje el Palacio Real y la iglesia de San Francisco, con claras intenciones política y monumental, proyecto ideado por Silvestre Pérez. CALATRAVA, Juan, p.145.

<sup>2029</sup> Está publicado en la Gaceta de Madrid del 12 de abril de 1810, p.427.

<sup>2030</sup> SUAREZ GARMENDIA, José Manuel, 1987, p.30.

propondría hacer el mismo planteamiento en Sevilla. La incorporación de los llamados planes de alineación llevaría a contraponerse con el interés particular de uno de los estamentos privilegiados de la ciudad, el clero regular, que tanta impronta tenía en el ambiente social. De ahí que el monarca promulgase un Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 14 de mayo de 1810, estructurado en cuatro artículos, por lo que se establecía que *se formará una plaza pública en el terreno que ocupa la manzana comprendida entre las plazas de Regina y la Encarnación* (art.1); *Antes de proceder a la demolición de las casas comprendidas en dichas manzanas, se indemnizará a los propietarios en bienes nacionales de igual valor y a su elección* (art.2), que fueran *las monjas de la Encarnación trasladadas a otro convento* (art.3) y que *los Ministros del Interior, de Hacienda y de Negociados Eclesiásticos quedaran encargados, cada uno en la parte que le corresponde, de la ejecución del presente Decreto* (art.4)<sup>2031</sup>.

Nuevamente nos encontramos con una medida interventora de la Administración sobre una propiedad privada, primando para ello el interés general, que en este caso sería la configuración de una plaza pública sobre el terreno que ocupa dos conventos. Sin embargo, al mismo tiempo se prevé una indemnización a los propietarios, concretamente las monjas de la Encarnación, siendo utilizado para ellos Bienes Nacionales. González de León en sus *Crónicas* precisa el proceso del derribo y la indemnización del propietario, e incluso en las actas municipales del Cabildo del 28 de septiembre de 1810, donde consta que uno de los vecinos expropiados, D. Juan M<sup>a</sup> de la Vega, fue *indemnizado con Bienes Nacionales*. Para José Manuel Suárez Garmendia el Decreto fue *uno de los muchos atropellos que se cometieron por los franceses; primeramente contra la propiedad ya que no hubo indemnizaciones de ningún tipo, y segundo contra los acuerdos establecidos en las Capitulaciones*. El proyecto de la demolición del convento de San Francisco abriría el camino para otro de los grandes hitos del urbanismo sevillano, la configuración de la Plaza Nueva. Como se podría pensar en un principio, no representaba ni mucho menos un atentado al patrimonio histórico-artístico, ya que en el interior del convento existían amplios espacios abiertos como las huertas, atrios y cementerios, por lo que se convertía en un espacio apto para ser urbanizado, definiéndose una amplia plaza, aunque en el plano se puede observar que se protegían algunos edificios de interés histórico-artístico, al quedar intacto la iglesia y el convento de San Buenaventura. Al mismo tiempo se reafirmaba que no habría problema con la propiedad privada, al pertenecer toda su área a las comunidades religiosas. Los proyectos de la Magdalena y de Santa Cruz no se llegaron a realizar, con la marcha de los franceses, aunque en años posteriores se volverían a plantear al ser necesario la creación de vías centrales en la ciudad para la actividad comercial. Con la excepción de la plaza de la Encarnación, los otros proyectos urbanísticos quedarían aparcados, más por causa de oposición a

---

<sup>2031</sup> GUICHOT, Joaquín *Historia del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla* Sevilla, 1896-1897. 4 Volum., p.21.

lo francés que por lo considerarse una medida negativa para los intereses de la ciudad, más aun cuando en los próximos decenios se volverían a retomar. Como añadido a este hecho cabe mencionar que con la marcha de los franceses se plantearía el problema de la saca de los escombros que habían sido producidos por el derrumbe del convento de la Encarnación.

## **2.2. Absolutismo y Liberalismo en la tutela del Patrimonio Monumental Estamental en el reinado de Fernando VII: Devolución y confiscación como reflejo del intervencionismo del Estado.**

### **2.2.1. La impronta del Congreso de Viena en el ámbito español: la recuperación de una mínima parte del Legado Monumental tras los expolios napoleónicos.**

La derrota napoleónica en 1812 no impidió que se siguieran *cometiendo* verdaderos destrozos al patrimonio histórico. La imagen de una España despojada de sus bienes, nos lo da el novelista español Benito Pérez Galdós en la evacuación que las tropas francesas de la Península Ibérica, plasmándolo exhaustivamente en *El equipaje del rey José* perteneciente a los Episodios Nacionales: (...) *y casi toda la servidumbre se ocupaba en el embalaje de las riquezas que José y los suyos se habían apropiado. Estos señores hacían buena presa dondequiera que ponían la mano, y no eran nada melindroso ni escogidos para esto del incautarse. Murat despojó la casa de Godoy y el Real Palacio, y José mando traer de Toledo, de Valladolid y del Escorial cuanto pudiese ser transportado (...) Luego que estuvo reunida gran cantidad de cuadros, estatuas, joyas de camarín y sacristía, dejando a las Vírgenes y Santas sin un anillo que ponerse (...) Una comisión separó lo sublime de lo bueno, y no siendo fácil llevarlo todo, dispusieron atropelladamente lo primero en cajas, mezclando lo sagrado con lo profano, es decir las bellas artes con los enseres de la casa y cocina del rey José (...) Muebles, porcelanas, vajillas, armas, añadiéronse al botín. Considerando que, aun después de tanto despojo, quedaba en España alguna cosa de punto inútil, según ellos, dada la ignorancia castellana, echaron manos a las colecciones mineralógicas del Gabinete de Historia Natural*<sup>2032</sup>. Los conocidos atropellos del Mariscal Soult llevándose más de cien cuadros como botín son solo un ejemplo de la situación de despojo patrimonial vivido en este momento. Una conocida efeméride de la debilidad de la monarquía española y de su poco sentido de concepción patrimonial fue el hecho de que el propio Fernando VII cedería parte del botín recuperado por el Duque de Wellington, que quiso devolverlo a lo que el monarca español permitió que siguiese en su poder al no desear *privar a V. de lo que ha venido a su posesión por medios tan justos como honorables*<sup>2033</sup>, por lo que decidió colgar los cuadros en su casa. Por consiguiente, el balance inicial del siglo no pudo ser más desolador, y como apunta Miguel Ángel López Trujillo *no solo por la multitud de robos, destrucciones y expolios sino porque se habían abierto vías*

<sup>2032</sup> PEREZ GALDOS, Benito *El equipaje del Rey José Episodios Nacionales*

<sup>2033</sup> GAYA NUÑO, 1964. p.101.

*para futuras catástrofes, mas aun cuando los españoles se había procedido a la solemne apertura a la afición a destroza. . Y es que como apunta María de los Santos García Felguera la presencia de la pintura española era infinitivamente más destacada que a finales del siglo anterior, pero todavía aparecía en cantidades modestas y, lo que es más importante, diluida en colecciones en la que primaban otros intereses (...) La razón es muy sencilla, la nueva pintura española llegada a colecciones francesas –casi todas ellas en París-, además resultaba prácticamente invisible porque estas colecciones eran privadas y las piezas destinadas al Museo Napoleón apenas si tuvieron de ser vista por el gran público. Hasta julio de 1814 las cincuenta piezas escogidas para el Museo Napoleón no llegan a París, siendo solamente escogidas por Vivant Denón seis de ellos, a los que se uniría otras doscientas cincuenta a los que él mismo escogería durante uno de sus viajes a la Península y que llegaron en 1813, por lo que en 1815 habría cerca de trescientos cuadros en los depósitos del Louvre<sup>2034</sup>.*

Es un hecho que después de la celebración del Congreso de Viena en 1812, una gran parte del patrimonio expoliado por las tropas napoleónicas fue recuperado por parte de muchos países europeos. En el caso de España, se promulgaron una serie de decretos en orden a recuperar las obras artísticas que habían sido sustraídas. La primera, la Real **Orden de 22 de abril de 1814**, serían nombrados *sugetos que recogan los monumentos robados en España por los franceses y especialmente los manuscritos españoles que se hallaban en las bibliotecas públicas; pidiendo asimismo los documentos y demás papeles que se llevaron del archivo de Simancas y otros públicos por orden de Napoleón. Igualmente quiere que se recoja, pidiéndolo el Gobierno con toda instancia y sin desistir de tan justa petición, la espada de Francisco Iº que fue arrebatada de la armería de S.M.* La medida sería completada con **Real Orden de 2 de junio de 1814**, por el que se comunicaba por el Secretario del Despacho de Estado al Ministro de Hacienda, *quese formen listas exactas de los que se llevaron los enemigos a Francia, tanto de objetos de Bellas Artes é Historia Natural, como lo que trasladaron de los principales archivos de la nación, con el objeto de hacer reclamación competente de ello al Gobierno actual de aquella potencia.* Las listas deberán ser remitidas a la Secretaria del Estado, para que desde ésta fueran remitidas a Pedro Labrador *á fin de que al tenor de ellas pueda hacer la debida reclamación, según le está encargado (...).*

A raíz de esta disposición las gestiones no se hicieron esperar. El 21 de enero de 1814 entre las instrucciones del Ministro del Interior Interino del Estado, Luyano, comunicó al Conde Fernán Núñez, figuraba en la octava que *se reclamasen los papeles, pinturas y objetos de Bellas Artes e Historia Natural que haya trasladado a Francia el Gobierno Intruso; para lo cual se pedirán listas de los que se llevaron los enemigos del Archivos de Simancas, del de Sevilla y de la Corona de Aragón, de los Palacios Reales, del Monasterio de El Escorial, catedrales e*

---

<sup>2034</sup> GARCIA FELGUERA, María de los Santos, 1991, pp.57-58.



*iglesias (...)*<sup>2035</sup>, por lo que hubo un primer intento de reponer las obras artísticas nacionales perdidas, intentando para ello insertar en el Tratado de Paz con Francia algún artículo respecto a ello, pero no tuvo éxito al contar con la oposición de los aliados, sobre todo los británicos, por lo que el propio Fernán Núñez abandonó la propia Conferencia Internacional para regresar a su embajada en Londres. Su sucesor, Pedro Gómez Labrador, pudo negociar con Luis XVIII la devolución de los manuscritos y joyas que habían pertenecidos a la nobleza, pero no se pudo resolver el patrimonio confiscado a la Corona, especialmente los cuadros y las joyas, por lo que comenzó una difícil negociación, poniendo el monarca francés en manos del duque de Almenara, un ex ministro de Relaciones Exteriores de José I, la devolución de las joyas reales, pero no así los lienzos, que muchos de ellos se ignoraban su paradero. Por fin, el Monarca francés Luis XVIII deseando normalizar sus relaciones con el resto de Europa, promulga el decreto de 8 de mayo de 1814, por el que establecía la devolución de las obras de arte expoliadas por las tropas napoleónicas, por lo que después de unas series de gestiones, Gómez Labrador vuelve a reclamarlo al Consejero de Estado, Roux, concretamente aquellos que no pertenecían al dominio privado, es decir los expoliados por los militares franceses de alto rango, pero las negociaciones quedarían frustradas durante los meses de junio y julio de 1814, más aún cuando el Tratado de París, firmado el 30 de mayo de 1814, no reconocería el expolio, por lo que el nuevo gobierno de la Restauración se opondría a devolverlo a su legítimo propietario, especialmente las pertenecientes a colecciones privadas, casualmente muchas de ellas pertenecientes al mariscal Soult, que había sido nombrado Ministro de Defensa.

Sería en la celebración del Congreso de Viena cuando se intentaría nuevamente recuperar el botín expoliado, por lo que el 16 de febrero de 1815 Gómez Labrador, volvió a intentar la reclamación diplomática de la restitución de los mismos, celebrando el día 22 una conferencia donde se especificaba que los cuadros y objetos de arte que se llevaron los Generales y empleados franceses, de los cuales había tomado un gran número en poder de los Generales Soult y Sebastiani, debían de responder éstos con sus bienes, encontrando una respuesta evasiva por parte del duque de Richelieu, Ministro francés de Negocios Extranjeros. Con la evasión de Napoleón de la isla de Elba y la adhesión de los mariscales entre ellos Soult, las pretensiones españolas se perdieron, ya que el 15 de mayo de 1815 Richelieu respondería a las autoridades españolas, defendiendo el derecho que tenían los propietarios adquirentes de los cuadros que habían sido confiscados durante la ocupación francesa: *que respecto a los cuadros en poder de los Generales franceses, que no estaban en manos del Gobierno, con arreglos a las leyes, proceder al embargo de los bienes de estos súbditos franceses*. Después de la derrota francesa de Waterloo, el destino de los bienes confiscados iba a cambiar, gracias a la intervención del

<sup>2035</sup> VILLA-URRUTIA, Wenceslao, *España en el Congreso de Viena*, Madrid, 1928, p.61.



Duque de Wellington que consideraría que fueran devueltas a sus legítimos propietarios. Por fin, un nuevo delegado español, el general Álava, amigo personal de Wellington, consiguió, que el rey Luis XVIII accediera a devolver un gran número de cuadros, contando incluso con los obstáculos de Denon, por lo que se pudo recuperar doce lienzos, algunos que habían pertenecido a la Cartuja de la Defensión de Jerez. El 30 de julio de 1816 serían depositadas finalmente en la Real Academia de San Fernando de Madrid. En un balance general se pudieron rescatar 284 cuadros, una cifra menor si se compara con el número total expoliado, y es que algunas colecciones privadas como la del mariscal Soult permanecieron en su poder<sup>2036</sup>. Y es que como afirma Leopoldo Stampa si *la rapiña institucional podía atacarse a través de la diplomacia, el asunto era muy distinto cuando de lo que se trataba era de colecciones privadas, generadas por la rapiña individual. Éstas eran más complicadas de intervenir y la actitud de los franceses no ayudaba, ya que consideraban que lo robado constituía ya parte del patrimonio cultural propio y sin mayor tipo de escrúpulos se resistían a la devolución del expolio de la mitad de Europa*<sup>2037</sup>.

Entre los objetos que se recuperaron se encontraría las famosas alhajas del Delfín, que se van a convertir en una de las piezas primordiales de la colección artística de la Monarquía y futuro objeto de polémica en la etapa de la Regencia por su propiedad<sup>2038</sup>. La historia del destino de una parte de la colección pictórica perteneciente a la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, confiscada por los franceses desde 1810, puede servir de ejemplo del largo proceso administrativo que muchas instituciones tuvieron que padecer a lo largo de varios decenios para poder recuperar su patrimonio expoliado, que en muchos casos se quedaría en una simple pretensión, producida por los errores burocráticos de la propia administración española o la inercia de la política tutelar de este periodo<sup>2039</sup>. En particular, la devolución del cuadro de Murillo “Santa Isabel curando a los enfermos”, fue un objeto de polémica, digno de un análisis jurídico, al reclamarse la legitimidad o no de la devolución por ambas parte, ya que Denon sostendría que el cuadro había sido regalada al Mariscal por la ciudad de Sevilla, a quien a su vez lo donó a Bonaparte, que sería rebatida por el General Álava, según el cual la ciudad no podía donar lo

---

<sup>2036</sup> STAMPA PIÑEIRO, Leopoldo, 2011, pp.392-400.

<sup>2037</sup> STAMPA PIÑEIRO, Leopoldo, 2011, p.401.

<sup>2038</sup> La devolución del tesoro del Delfín tuvo lugar en diciembre de 1815, mediante una entrega formal en la Embajada española de París, ante el agregado Agustín Tabira y Acosta, designado por el embajador de España señor conde de Peralda, y el señor Roux, comisionado del Gobierno francés. El día 3 de diciembre de 1816, se entrega formalmente las alhajas al marqués de Santa Cruz, representante de la Junta de Protección del Museo de Ciencias Naturales por el entonces teniente coronel, Nicolás Minoisser, comisionado para la conducción de las alhajas desde París. ARBETETA MIRA, Letizia *El tesoro del Delfín. Alhajas de Felipe V recibidas por herencia de su padre Luís, Gran Delfín de Francia*, Museo Nacional del Prado,

<sup>2039</sup> RAMOS SUAREZ, Manuel Antonio, “La ocupación napoleónica y el patrimonio pictórico. La iglesia del hospital de la Santa Caridad de Sevilla” *Goya*, Núm.330, Enero-Marzo, 2010, pp.34-47.

que no era suyo, por lo que finalmente la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla pudo recuperarlo<sup>2040</sup>. Más feliz fortuna otras iniciativas privadas en orden a la recuperación de los cuadros, como la actuación de Fray Crisanto, prior de El Escorial, que consiguió en 1814 que se devolviera al monasterio por parte de las autoridades francesas algunos de los objetos sustraídos. Al mismo tiempo se nombraría al general Miguel Ricardo de Ávila para que hiciera las gestiones precisas para la recuperación patrimonial, que conseguiría algunos éxitos, como la devolución de cincuenta y siete cuadros que estaban depositados en el Museo del Louvre.<sup>2041</sup> En el caso de Sevilla una de las obras maestras del desaparecido Colegio de Santo Tomás, la realizada por Zurbarán La apoteosis de Santo Tomás de Aquino, fue llevado a París por Soult, quien se lo dio al Louvre en 1813 junto con tres pinturas de Murillo, siendo devuelto a España en 1815-1816 y reinstalado en 1819 en su ubicación original<sup>2042</sup>. En resumidas cuentas, había triunfado en alguna medida el espíritu de Quatremy al reclamarse una concepción nacional por lo que los bienes formaban parte del país de origen. A pesar de ello, no quiere decir que no hubiera conflictos de intereses entre los legítimos propietarios y aquellos que por los avatares de la guerra había trasladados los bienes confiscados a París, como fueron los casos del legado de pinturas del Mariscal Soult<sup>2043</sup>. Sin embargo paradójicamente algunas magnificas composiciones pictóricas que habían sustraídos las tropas francesas y que se encontraban en manos del Duque de Wellington serían regaladas por el Conde Fernán Núñez en nombre del Rey español<sup>2044</sup>.

<sup>2040</sup> SÁNCHEZ-GARCÍA, Raquel “Vivant Denón en España”, en RAMOS SANTANA, Alberto; ROMERO FERRER, Alberto (ed.). *Liberty, Liberté, Libertad. El mundo hispano en la era de las revoluciones*, Universidad de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz, 2010, pp.489-490.

<sup>2041</sup> LOPEZ TRUJILLO, M.A., 2006, p.152.

<sup>2042</sup> TROMANS Nicolás, Un museo en Sevilla en 1822, en *Goya*, 282, Madrid, 2001, p.158.

<sup>2043</sup> “En un principio solamente se pudieron recuperar aquellas piezas que estaban depositadas en el Museo del Louvre, como se refiere Alava en su despacho del 22 de septiembre de 1815, acompañando al duque de Wellington y al monarca francés, Luis XVIII:(...) *mañana pasarán mis comisionados al Museo, y se entregarán de los cuadros que en él hubiese pertenecientes a España, dejando para el otro día la reclamación y toma de posesión de los que se hallan en Galerías particulares, como las de Soult, Sebastiani, etcétera*. VILLA-URRUTIA, W.R.” Como se recobraron y salvaron de segura ruina los cuadros de Rafael que se llevó José Bonaparte y que son joyas del Museo del Prado” *Cultura española*, Revista Trimestral, Madrid, 1907, pp.216-217.

<sup>2044</sup> Probablemente el caso de las pinturas españolas que habían sido sustraídas por José Bonaparte en su huida de España y requisada por el Duque de Wellington sea uno de los testimonios más significativos de la dejadez con que se resolvió por parte de la Administración algunas de las colecciones regias perdida tras el expolio napoleónico, quizás por una considerarse aun este conjunto de bienes más bien de naturaleza jurídica privada, por lo que el Monarca podía hacer lo que quisiera con su colección, y por consiguiente no considerarla como un patrimonio identificativo con lo público. Los datos anecdóticos del proceso hablan por si solo: Una vez requisados las obras de arte por el Duque de Wellington, son enviadas al presidente de la Real Academia Inglesa quien le informa que las obras forman parte de la colección regia española. por lo que Wellington se dirigiría por carta a su propio hermano Sir

**2.2.2. La devolución de los bienes históricos-artísticos del Patrimonio Conventual expoliado a las órdenes religiosas: la Real Orden del 20 de mayo de 1814, relativa á que se haga entrega á los Regulares de sus conventos y propiedades.**

La vuelta de Fernando VII a España, una vez que fueron expulsados las tropas francesas, va a significar un hecho trascendental en el ámbito de los derechos patrimoniales: La devolución a las órdenes religiosas de aquellos bienes que habían sido confiscados, a raíz de la Real Orden del 20 de mayo de 1814, por lo que se inicio todo un proceso administrativo que incluso no terminaría en algunos casos hasta 1840. La lectura de la Real Orden no deja duda su objetivo primordial: contar con el apoyo de las órdenes regulares en su camino hacia la configuración de un estado absolutista: *Informado el Rey de que la miseria y abandono en que han quedado los Regulares por el injusto despojo que han sufrido de todos sus bienes, los tiene errantes y fuera del claustro con escándalo del pueblo, y sin poder llenar los deberes de su instituto; y no pudiendo por otra parte desentenderse de las ventajas que resultarán al Estado y á la Iglesia de que se reúnan en sus respectivas comunidades, ha resuelto S.M. que se les entreguen todos los conventos con sus propiedades y cuanto les corresponda, para atender a su subsistencia y cumplir las cargas y obligaciones á que están afectas; haciéndocelos dicha entrega con intervención de los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos respectivos, quienes informarán a S.M. de las dificultades e inconvenientes que se le presente.*

Serían los Intendentes de cada provincia los encargados de organizar la devolución de los bienes de las comunidades conventuales, para lo que se promulgó la **Real Orden del 23 de julio de 1814** comunicada por el Ministerio de Gracia y Justicia al Consejo Real por medio de su Presidente, relativa a declarar que el reintegro de los bienes y rentas á los Religiosos es privativo de los Intendentes, y la Circular del 3 de mayo de 1815, por el que encarga a los Intendentes del Reino que informen al Consejo acerca de las enajenaciones de bienes de Iglesias, beneficios, &c., hechas durante la dominación francesa. En la citada circular se establecería todo un procedimiento para recuperar aquellos bienes inmuebles que habían pertenecidos a las órdenes religiosas, volviendo a subrayar la potestad pública de los intendentes a la hora de organizar la devolución, que entre sus obligaciones *se informase al Consejo por mi mano todas las enagenaciones de bienes de iglesias, beneficios, capellanías y demás establecimientos piadosos y eclesiásticos hecha durante la dominación francesa, expresando circunstancialmente á quiénes correspondían dichos bienes; porqué autoridad han sido enagenados; qué diligencias y formalidades han precedido para ello: en que cantidades fueron tasados y rematados dichos bienes: quienes los han percibidos; y que personas los han comprado: con todo lo demás que se le ofrezca y*

---

Henry Wellesley, Embajador inglés en España en el que se manifestaba el deseo de devolverle las pinturas, e incluso el propio Wellington en persona en 1816 le vuelve a insistir en esta pretensión al embajador español en Londres, Conde de Fernán Núñez. Sin embargo, el embajador español en nombre del Rey resolvería que las pinturas se quedaran en Londres, pudiéndose admirar en la actualidad en el Wellington Museum.

*parezca, egecutándolo con la posible brevedad y urgencia que exige la reparación de los males ocasionados á la iglesia y Estado eclesiástico. No cabe duda que la devolución de los bienes inmuebles dio lugar a conflictos jurídicos entre los compradores de aquellos bienes inmuebles que habían salido a subasta y las pretensiones por parte de la autoridad civil que reclamaba a aquellos las propiedades confiscadas, como aparece reflejada en la propia Circular: Los Ayuntamientos de los pueblos en muchas partes oprimidos por las contribuciones y crueles exacciones hechas por los franceses, en otros el deseo de enriquecerse muchos á poca costa, y aprovechándose de la ocasión que proporcionaba el desorden, han hecho unas llamadas ventas de las mencionadas fincas, singularmente de las capellanías vacantes, sin formalidad alguna, sin seguridad de reintegro en favor de los establecimientos, y á unos precios de ninguna consideración. Los que injustamente detentan estos bienes regularmente son los más poderosos de los pueblos; y los dueños legítimos defraudados se ven en la dura necesidad de seguir pleitos muy costosos que no pueden sufragar, por lo que se declaraba nulas todas las enajenaciones de bienes de iglesias, beneficios, capellanías y demás establecimientos eclesiásticos y piadosos, hecha durante la dominación francesas por los Justicias y los Ayuntamientos de los pueblos, como contraria a todo derecho, á la libertad que este requiere en los contratos.*

Entre los bienes que fueron requeridos a las órdenes religiosas se encontrarían los de interés histórico y artístico, por lo que en principio perdería la identidad secularizada que había ido adquiriendo con la invasión francesa. Los bienes inmuebles fueron los más solicitados en cuanto a su reclamación, existiendo innumerables casos por toda la geografía española de devoluciones de monasterios a sus respectivos propietarios. Un ejemplo significativo sería el destino del Monasterio de Mejorada, que había sido ocupado por los franceses el 13 de enero de 1809 y sería devuelto el 6 de junio de 1814, en virtud de la publicación del Decreto del 20 de mayo de 1814. El relato de los hechos está publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, ya en 1902: *En la noche del 13 de enero de 1809, habiendo entrado rompiendo sus puertas 400 polacos, aliados de los franceses, fue saqueados por ellos llevándose no solo los efectos de todas las Oficinas y Celdas de los Religiosos, sino también los cálices y Plata que hallaron en las iglesias y sacristías (...) escarmentados por este lance, procuramos poner en custodia algunos otros muebles q. nos habían quedado, conduciéndolo a deshonor de la noche, a las iglesias de (...) y á algunas casas de varios particulares de dcho. Pueblos, en donde durante todo el tiempo de la Guerra se han conservado (...) Viendo, pues, que con éste y otros semejantes escandalosos exemplares, lexos de conseguir que los Religiosos nos adhiriésemos á sus perversas máximas permaneciámos cada vez más firme y más constantes en el amor y fidelidad á Nro. Legítimo Soberano el Señor Don Fernando 7º, y que cada uno, en la manera que podía, cooperaba á la justa causa que defendía la Nación, se propusieron acabar de una vez con todos nosotros. A cuyo fin dieron un impío gral. Decreto, por el qual se manadaba quedasen suprimidos todos los Monasterios y Conventos y que todos los religiosos fuésemos arrojados de ellos, confiscadas todas nras. Haciendas y ocupados todos nros. bienes, que desde aquel instante empezaron a llamarse Bienes*

*Nacionales. No obstante dho. Decreto, continuamos en el Monast<sup>o</sup>. los más de los monges hasta fines de dho. año de 1809 en que cansados ya de sufrir persecuciones y viendo no habían quedado medios para subsistir, llenos de aflicción y desconsuelo, se marchó cada uno donde pudo hallar algún abrigo, quedando solamente en él los PP. (...). No obstante la escasez y continuos peligros de perder la vida, continuamos los quatro ya referidos en el Monasterio, hasta q. el Correxid. de Olmedo, Don Joaquín Tercero (...) nos pasó un oficio a N.P. Prior y a mí el Vicario, con fecha de 16 de febrero de 1810, para q. inmediatam. desocupásemos el Monasterio (...) nos vimos en la dura precisión de salir de él, el Prior en el día 17 y yo en el 21 de dho. mes de Febrero (...). En cumplimiento de este R. Decreto (Se refiere al dado por Fernando VII el 21 de mayo de 1814) se verificó en este Monasterio de la Mejorada, en el día 6 de junio de dho. año de 1814; la qual possession nos fue dada por D. Alvaro Villapecellin, Alcalde de la Villa de Olmedo (á ord. de ord. comunicada por el Sr. Intendente de esta Provincia), con intervención del Sr. Don Pedro Alcántara Ruiz, Cura de San Andres y Vicario de la misma, Delegado por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gómez de Salazar, Obispo de la ciudad de Avila. Nuestro Prior, fue el que tomo posesión a nombre de la comunidad (...) quedando nosotros en la quieta y pacífica possession de este nro. Monasterio (...)*<sup>2045</sup>.

Un gran número de colecciones de pinturas y esculturas fueron reclamadas por las órdenes religiosas a los Intendentes de las provincias. Gracias a las investigaciones de Rocío Perrín se ha podido conocer las reivindicaciones que las comunidades religiosas hispalense hicieron al Intendente del Alcázar de Sevilla, para que les fueran devueltas los bienes muebles que habían sido confiscados por los franceses, para lo que se seguiría un entramado muy simple y repetitivo, en la que la mayor parte de las ocasiones se enviaba una instancia dirigida al responsable suplicando que fueran devueltas las obras confiscadas. Posteriormente el Teniente de Alcaide se le comunica al Veedor para que procediera a la devolución. No cabe duda que hubo amplios problemas a la hora de proceder ya que en una misma pieza podía ser reclamada por más de una entidad religiosa, siendo resuelta por el responsable del propio Alcázar de forma causística, sin dar lugar a reclamaciones ni recursos posteriores<sup>2046</sup>. Aunque un gran número de bienes

---

<sup>2045</sup> El texto aparece reproducido en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tercera Época, Año VI, Tomo VI, Enero a junio de 1902, Madrid, 1902, pp.389-392.

<sup>2046</sup> PERRIN, Rocío, *El Alcázar de Sevilla en la Guerra de la Independencia. El Museo Napoleónico*. 1<sup>o</sup> edición: septiembre de 2009, pp.166-167. Algunos ejemplos que nos proporciona las recientes investigaciones de Rocío Perrín nos ayuda a conocer las gestiones que se realizaron en Sevilla entre 1813 y 1814. El fraile del Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, Alonso de Benzos, explica que conocido el Real Decreto del 20 de mayo de 1814, mandando que se entregasen las propiedades a los conventos y demás instituciones a sus dueños, pide que se le devuelva el Busto del padre Jerónimo que se encuentra en el Real Alcázar, junto con otras pinturas que acredita, fueron extraídas de su orden por el Gobierno Intruso y lo firma el 16 de junio de 1814. Por su parte Antonio Lassa en Sevilla a 16 de junio de 1814, no manifiesta reparo que se le devuelvan, recibíéndose el recibí el día 21 de junio de 1814. La reclamación que haría el Padre Prior del convento de Santo Domingo de Portacoeli, a fecha de 5 de junio de 1814, se haría en los mismos términos: El Padre Prior escribiría al Intendente Antonio Lassa pidiendo que se le entregue los bienes, a lo que se acepta su



muebles fueron recuperados por las distintas comunidades religiosas, el destino de los mismos estaba echado, ya que pronto las medidas desamortizadoras truncarían definitivamente la posesión de los mismos. La reintegración de la Compañía de Jesús a raíz de la promulgación de **la Real Orden de 29 de mayo de 1815, el Real decreto de 19 de octubre de 1815** por la que se crea una Junta de Ministros con toda la autoridad y jurisdicción necesaria para realizar el restablecimiento de la Orden de la Compañía de Jesús y **la Real cédula de S.M. de 3 de mayo de 1816** por el que se manda que el permiso concedido en el Real decreto de 29 de mayo de 1815 para el restablecimiento de la Orden de la Compañía de Jesús en las ciudades y pueblos que lo habían pedido sean extensivo, general, y sin limitación a todos los demás de los dominios de S.M. en que se hallaba establecida al tiempo de su extrañamiento significaría la devolución de sus bienes materiales en la Península Ibérica constituye uno de los hitos más importantes de este momento, por lo que revocaba la pragmática de 1767 de Carlos III, expresión claramente absolutista de la etapa borbónica dieciochesca, aunque en 1808 la Junta Central había permitido el regreso individual de algunos jesuitas<sup>2047</sup>.

### **2.2.3. La irrupción de las medidas desamortizadoras en la delimitación de la Propiedad del Patrimonio Eclesiástico Monumental como bienes nacionales en el Trienio Constitucional.**

#### **2.2.3.1. Algunas disposiciones legales de protección de los bienes de interés histórico y artístico desamortizados: el Decreto del 25 de octubre de 1820.**

Los precursores del liberalismo constitucionalista de las Cortes de Cádiz de 1812 plantearían las primeras medidas desamortizadoras<sup>2048</sup>. En las Cortes de Cádiz de 1812 ya se hayan recogidas algunas normas de carácter desamortizadora, como **el Decreto del 17 de junio**, que ordenaba el secuestro de los bienes que pertenecían a establecimientos eclesiásticos *o religiosos extinguidos, disueltos o reformados por results de la insurrección o por providencias del gobierno intruso*. Sin embargo, en el artículo 7º se delimitaba que el secuestro de los bienes sería provisional, ya que se hacía con la promesa de reintegrar dichos bienes a la comunidad en caso de que reanudasen la vida religiosa en comunidad. En las Cortes de Cádiz, el ministro interino de Hacienda, Canga de Argüelles, presentaría una Memoria por el que se

---

devolución, ordenando al Veedor que les entregue las reclamaciones que reclama. PERRIN, Rocío, pp.166-167.

<sup>2047</sup> REVUELTA GONZALEZ, P. Manuel *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX, Trienio Constitucional*, C.S.I.C. Escuela de Historia Moderna, Madrid, 1973, pp.5-6.

<sup>2048</sup> Martínez Marina formularía en su Teoría de las Cortes el fundamento de la expropiación de los bienes eclesiásticos: *El primero de todos los medios indirectos que reclaman la razón, la justicia y el orden de la sociedad es moderar la riqueza del clero en beneficio de la agricultura; poner en circulación todas las propiedades afectas al estado eclesiástico y acumulación en iglesias y monasterios contra el voto general de la nación; restituirlas a los pueblos y familias de cuyo dominio fueron arrancadas por el despotismo, por la seducción, por la ignorancia y por la falsa piedad.* .



ordenaba la venta en pública subasta de todas las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a las cuatro órdenes militares, los baldíos necesarios a los pueblos para la manutención de sus ganados y las fincas pertenecientes a los conventos destruidos por la guerra. Esta Memoria inspiraría más tarde el decreto de 13 de septiembre de 1813, constituyendo según Tomás y Valiente, la primera norma legal desamortizadora del siglo XIX, por el que se pusieron en estado de venta los de las temporalidades de los jesuitas y los de las cuatro órdenes militares, y los de los conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra. Parece probable que este decreto no llegó a aplicarse ya que con la vuelta de su exilio, Fernando VII anularía estas medidas y dispuso que se le devolviera a los conventos sus bienes, pero su espíritu prevalecería en medidas posteriores<sup>2049</sup>.

Posteriormente entre 1820 y 1823 en el llamado periodo del trienio liberal se ponían en práctica las medidas aprobadas por las Cortes de Cádiz y truncadas por la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1814<sup>2050</sup>. Con la promulgación del **Decreto del 9 de agosto de 1820** se restablecía la venta de los bienes nacionales, así definidos por el Decreto de 13 de septiembre de 1813, más los de la Inquisición, por lo que reponía la norma de Cádiz y se daba comienzo a una desamortización efectiva. La medida culminaría con el **Decreto del 17 de agosto de 1820**, por el que se volvía a suspender la Compañía de Jesús, aplicando sus bienes al Crédito Público. En el **Decreto de 27 de septiembre de 1820** se prohibirían a todas las entidades religiosas la adquisición de bienes raíces o inmuebles. Unos meses más tarde se recrudecería la medida con la promulgación del **Decreto de 1 de octubre de 1820**, la llamada Ley de Monacales, por la que se suprimirían todas las órdenes monásticas (benedictinos, jerónimos, cartujos y basilios) y todos los hospitalarios de cualquier clase (art.1). En cada pueblo, solo podía existir un convento de la misma orden, siendo necesario que la comunidad reuniese al menos 24 religiosos ordenado, por lo que en caso contrario, debería reunirse con la del convento más inmediato de la misma orden (art.16-17), al mismo tiempo, en el artículo 23, todos los bienes de los monasterios y conventos suprimidos serían considerados bienes nacionales. Unos días después se promulgaba la **ley de 11 de octubre de 1820**, conocida como ley de las desvinculaciones, en el que su artículo 1º suprimía *todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos, y cualquier otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes....*, que aunque esta norma afectaba primordialmente al régimen sucesorio ordinario, es evidente como apunta Tomás y Valiente que concernió a los intereses económicos de instituciones

---

<sup>2049</sup> TOMÁS Y VALIENTE, *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona, Ariel, 1989, p.63. En el Decreto de 1813 se reconocía la deuda posterior a marzo de 1808 al tiempo que garantizaba el pago de sus intereses con cargo a las rentas de las fincas existentes en el fondo de amortización.

<sup>2050</sup> Para Tomás y Valiente representa el trienio constitucional una prolongación de la obra desamortizadora del anterior periodo liberal. p.581.

como capellanías o fundaciones de carácter eclesiásticos. En su artículo 15º se prohibía la adquisición de bienes inmuebles a todo tipo de manos muertas por lo que se daría un duro golpe a los intereses económicos de muchas entidades eclesiásticas<sup>2051</sup>.

Aunque en menor medida que la legislación posterior, se irán desarrollando una serie de medidas para proteger el Patrimonio Histórico-Artístico Conventual desamortizado, por lo que se promulgaría **el Decreto del 25 de octubre de 1820** se incorporaban al Estado los bienes pertenecientes a las instituciones suprimidas por el Decreto de 1 de octubre de 1820. Este decreto afectaría tanto a los conventos de monjas como a los de frailes, sería retomada posteriormente en 1835-1837. Ya se establece la intervención de los gefes políticos que se encargarían de custodiar *todos los archivos, cuadros, libros y efectos de bibliotecas en los conventos suprimidos*, remitiendo inventarios al Gobierno. Una parte de los bienes recogidos pasarían a los establecimientos de instrucción pública, entre los que se encontraban museos y bibliotecas que hubiese en cada provincia. Al mismo tiempo se puede contemplar un verdadero deseo de recuperar los bienes perdidos con anterioridad, especialmente los vendidos, al reconocerse como válidas las ventas de bienes muebles realizadas ante de la ley de supresión con excepción de *las pinturas, manuscritos, ornamentos y demás objetos pertenecientes a las bellas artes, literatura o culto divino*, que deberían ser entregados por sus poseedores a la autoridad (art.7). A raíz de la publicación del Decreto de 25 de octubre de 1820 se promulgarían un amplio número de disposiciones referentes a las distintas provincias en las que se establecía cuales eran los conventos que debían subsistir, por lo que nos permite conocer los conventos y monasterios que pudieron ser salvados de la destrucción patrimonial, por los que he creído conveniente incluirlos en este trabajo, siendo los más importantes las siguientes Reales Órdenes y Cédulas:

Real orden de 12 de marzo de 1821 declarando que subsistan en la ciudad de Segovia los conventos que se mencionan.

Real orden de 15 de marzo de 1821 declarando que subsistan en la ciudad de Palencia los conventos que se mencionan.

Real orden de 15 de marzo de 1821 declarando que deben subsistir en la villa de Madrid los conventos que se mencionan.

Real orden de 5 de abril de 1821 declarando que deben subsistir los conventos suprimidos en la provincia de Guadalajara

Real orden de 8 de abril de 1821 que subsistan en Oviedo el convento de los dominicos y el de franciscos observantes y en las demás provincias que se citan.

Circular de 10 de abril de 1821 por el que se disponen que subsistan algunos conventos de la localidad de Cuenca.

<sup>2051</sup> TOMAS Y VALIENTE, 1989, p.584.

Circular de 10 de abril de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la provincia de Guipúzcoa.

Real Orden de 13 de abril de 1821 que subsistan en Valladolid algunos conventos así como de otras localidades de la provincia.

Circular del Ministerio de Gracia y Justicia del 14 de abril de 1821 disponiendo que subsista los conventos de Sto. Domingo y San Francisco de Vitoria así como otros conventos de la provincia.

Circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 17 de abril de 1821 por el que subsistan algunos conventos de la provincia de Pamplona y otras localidades navarras

Circular de 21 de abril de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de localidades castellanas.

Real orden de 25 de abril de 1821 disponiendo que subsista el convento de capuchinos de Ubrique.

Circular de 29 de abril de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la diócesis de Orihuela. Real orden de 30 de abril de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la ciudad de Málaga.

Real orden de 2 de mayo de 1821 por el que subsistan en la ciudad de Avila algunos conventos.

Circular de 4 de mayo de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la ciudad de Soria.

Circular de 8 de mayo de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la ciudad de Zamora y de otras localidades zamoranas.

Circular del Ministerio de Gracia y Justicia de 8 de mayo de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la ciudad de Córdoba y de otras localidades cordobesas.

Real orden de 8 de mayo de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la ciudad de Córdoba y de otras localidades cordobesas.

Real orden de 9 de mayo de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la ciudad de Zaragoza y de otras localidades aragonesas.

Real orden de 10 de mayo de 1821 por el que se dispone que subsistan algunos conventos de la ciudad de Burgos y de otras localidades castellanas.

Real Orden de 11 de mayo de 1821 por el que se encarga al Gobierno que tome las medidas necesarias para que recoja y guarde los documentos más importantes de los distintos archivos del Reino.

Real orden de 16 de mayo de 1821 resolviendo que subsistan en Barcelona el convento de dominicos, el de carmelitas calzados, el de agustinos calzados, el de mercenarios calzados, y más que se expresa.

Real orden de 21 de mayo de 1821 haciendo arreglo de conventos de la provincia de Jaén, que el jefe político de ella ha formado en cumplimiento de la ley de 25 de octubre de 1820, de acuerdo con el R. obispo de la diócesis y con M.R. cardenal arzobispo de Toledo.

Circular de 8 de junio de 1821 por el que se establece que subsista por utilidad y conveniencia pública el convento del Espíritu Santo de Sevilla.

Real orden circular de 20 de marzo de 1822 sobre las solicitudes a terrenos contiguos a los edificios que pertenecieron a corporaciones suprimidas, y han sido cedidos por el Gobierno para objetos de beneficencia.

Real Decreto del 15 de noviembre de 1822 por el que se suprimen todos los conventos y monasterios que estén despoblados en pueblo que no pasen de 450 vecinos, excepto el de San Lorenzo del Escorial.

En el ámbito de la Archidiócesis de Sevilla serían promulgada la Real orden del 15 de mayo de 1821 resolviendo que subsistan algunos conventos en la ciudad de Sevilla a raíz de la promulgación de la Ley del 25 de octubre de 1820, de entre los que se encontraban el convento de San Pablo de los dominicos, el de San Francisco de observantes, reuniéndole los religiosos del de S. Buenaventura, de igual instituto, que se suprime; el de San Pedro de Alcántara, de franciscos descalzos, el de San Antonio de la provincia de los Angeles, el de capuchinos de Sta. Justa y Rufina, el de Nuestra Señora de Consolación de Terceros, reuniéndole los religiosos de los conventos de Bollullos del Condado y de Osuna, de la misma orden, que se suprimen; el de Nuestra Señora del Carmen de carmelitas calzados, el de San Francisco de Paula de mínimos, agregándole las comunidades de los de Nuestra Señora de la Victoria de Triana, Huelva, y Jesús María de Almonte, de la propia religión, que se suprimen; el de agustinos calzados, el de S. Josef de mercenarios descalzos, destinándole los individuos de igual instituto del de Huelva, que se suprime; el de carmelitas descalzos del Santo Angel, el de Nuestra Señora de la Merced de mercenarios calzados, destinándole los individuos de igual instituto del de Huelva, que se suprime; el de carmelitas descalzos del Sto. Angel, el de Nuestra Señora de la Merced de mercenarios calzados, el de trinitarios calzados de Sta. Justa, reuniéndole la comunidad del de Jerez, y el de trinitarios descalzos; en Triana el de San Jacinto, de dominicos, hasta que se erija la correspondiente parroquia en el sitio conducente, en atención a ser población separada de Sevilla por el río, tener un numeroso vecindario, que se compone de muchos labradores, y hallarse comprendido por lo tanto en el artículo 16 de la citada Ley de 25 de octubre, reuniéndole los religiosos de Sto. Tomás, de igual orden, de Sevilla, que se suprime; subsistirá además en esta ciudad el de Nuestra Señora del Pópulo, de agustinos descalzos, destinándole la comunidad del de Luque, de la misma religión, que se suprimió con el arreglo de conventos de la provincia de Córdoba (...) S.M. se ha servido resolver igualmente que se supriman en Sevilla los conventos de Sto. Domingo de Portacoeli, de Montesión y del de Regina Angelorum, de dominicos, agregándolos al de San Pablo de su instituto de la misma ciudad; el de San Diego de alcantarinos, reuniendo sus religiosos al de S. Pedro de Alcántara de la propia ciudad; el de San Alberto y el de Sta. Teresa, de carmelitas calzados, trasladándolos al de nuestra Señora del Carmen, de igual instituto, de la misma ciudad; el de San Acasio de agustinos calzados, que pasarán al que queda de su orden en la propia ciudad; el colegio de San Laureano, de mercenarios calzados, agregando sus individuos al de nuestra señora de la Merced de la misma ciudad; el de Nuestra Señora del Valle, de observantes recoletos,

destinándolos al de Espartinas, de su instituto, y el clérigos menores del Espíritu Santo; en Triana el de Nuestra Señora de los Remedios, de carmelitas descalzos, reuniéndose su comunidad al del Santo Angel de la propia ciudad de Sevilla (...). Curiosamente sería promulgado posteriormente la Circular de 8 de junio de 1821 por el que se establece que subsista por utilidad y conveniencia pública el convento del Espíritu Santo de Sevilla, y por interés espiritual como podemos leer en el propio decreto: a fin de que al menos se conserve la memoria de un instituto que ha dado honor a la religión y al estado; pues las cuatro casas que existían en las provincias de Sevilla, Granada, Málaga y Extremadura han sido suprimidas en sus respectivos arreglos de conventos, por no tener el número prevenido por la ley.

#### **2.2.3.2. Una nueva concepción pública del Patrimonio Conventual Monumental desamortizado.**

No cabe duda que se genera una conciencia patrimonial en torno a los bienes conventuales que habían sido suprimidos por las medidas desamortizadoras, tanto en algunos sectores de la intelectualidad, como incluso en algunos políticos. El Ministerio de la Gobernación, José María Moscoso, intervendría en las Cortes el 3 de mayo de 1822, pidiendo una votación para conseguir un crédito de 150.000 reales para la recogida y traslado de las obras de arte de los conventos suprimidos, para lo que se contemplaría un Museo Nacional en Madrid. El discurso del político liberal es un verdadero alegato de defensa del Patrimonio: (...) *no solamente le parecía corta la rebaja hecha por la Comisión de Hacienda en esa cantidad que tiene designada el Gobierno para conducir a la capital a los monumentos de artes encontrados en los monasterios suprimidos, sino que debía borrarse del todo, apoyado S.S. en que la situación de penuria en que nos encontramos, estos gastos eran inútiles, y en que en su opinión estos monumentos de las bellas artes deberían quedar en las provincias para servir allí a la utilidad común. Procuraré, con la brevedad posible, deshacer uno y otro fundamento de raciocinio (...) En indudable que en el día es una Nación exámine y moribunda, reducida a tal estado de estrechez, que no puede con gallardías ni gastos superfluos (...) en una Nación que no tiene cubiertas sus atenciones, y cuyos talleres están parados, y su comercio muerto, y decaída su agricultura, no hay ni puede haber gasto alguno, aunque sea de un solo maravedí, que deba reputarse útil, justo y necesario. Pero esta doctrina creo que no tiene aplicación a la cantidad que es indispensable gastar para traer a Madrid esto objetos de las bellas artes, y sí la tendría en la cantidad que sería necesario expender para que fuesen útiles a la instrucción pública en las provincias. Los cuadros, las estatuas, las esculturas, las lápidas, los lucillos, las monedas, los manuscritos, las antigüedades de toda especie, son objetos preciosísimos que tienen en sí un valor intrínseco: son una riqueza real y verdadera, y riqueza que se asciende a muchos millones, pero que se pierden con el más ligero abandono. Y siendo una economía el no dejar perder esta riqueza, es menester ponerla a buen recaudo y conducirlas a la capital, donde hay edificios a propósito y profesores que le sepan cuidar, y donde pueda servir a la gloria de la Nación; siendo muy doloroso que estos restos venerados de la antigüedad y de las artes estén hacinados en los almacenes del crédito público, siendo nido de sabandijas*

y expuestos a los insultos e irreverencias de la ignorancia, que los mira con desprecio y desacato<sup>2052</sup>. Prosigue con la situación en que se encuentran los bienes históricos-artísticos despojados en las provincias: *Dícese que queden en las provincias: más yo creo que no deben hacerse así, porque no habiendo edificios donde se puedan recoger y custodiar, ni aquel espíritu de ilustración que da valor y utilidad a estos objetos, estarían allí abandonados, como lo están en el día objetos muy preciosos. Díganlo, si no, los famosos torsos encontrados en las excavaciones de Itálica, que están abandonados en el alcázar de Sevilla, lleno de telarañas y encerrados donde nadie los ve ni estima (...) Por lo tanto, creo que es economía emplear algún dinero en conducir estos monumentos a Madrid, donde estarán bien conservados y serán útiles, y que el dejarlos en las provincias causaría mucho más gastos, porque sería necesario habilitar edificios y aumentar empleos, conserjes, profesores (...)*<sup>2053</sup>. El diputado Gómez se enfrentaría a esta propuesta al estimar que los monumentos provinciales cumplen una misión de instrucción local que se perdería si fueran trasladados a Madrid: *(...) Ni es tampoco justo que Madrid sea el solo punto donde se reúnan todas las preciosidades de los conventos suprimidos, ni el centro exclusivo de la luz y de la riqueza, que debe comunicarse a toda la Nación española. Y pues que en mi modo de entender no deben de sacarse de las provincias los monumentos (...)*. El Secretario de la Gobernación de la Península, José María Moscoso señalaría al respecto: *Las naciones más ilustradas han debido parte de sus glorias a los objetos de las nobles artes que han reunido, y que las han hecho visitar por individuos de toda la Europa. La España, tratándose del ramo de nobles artes, acaso es la más rica de Europa, ya por los excelentes profesores y de escuela particular que tiene, y ya también por los monumentos de esta clase que posee, aun de escuelas extranjeras, pero nunca ha podido excitar la curiosidad de los viajeros y amantes de las nobles artes. Muchos de estos monumentos existen en los conventos suprimidos, y acabarán de arruinarse si no se acude a recogerlos. Están entre el polvo y la polilla, y los perderemos para siempre si las Cortes no decretan los fondos necesarios para recogerlos y conservarlos. Dentro de uno o dos años el daño estará hecho y será irremediable. El Museo de Madrid, que al cabo ha de ser el punto donde se ha de reunir estos objetos, se está reparando, y tiene la extensión necesario para formarse en la capital un establecimiento tal, que sea el objeto de atención de los hombres ilustrados de Europa. Y presentándose una ocasión tan favorable, ¿será justo que privemos a las generaciones venideras, por esta corta cantidad, de objetos tan apreciables?. En cuanto a las provincias, el Gobierno se había propuesto conservar en ellas los monumentos que pueden llamarse de segundo orden; pero lo que son copias en la parte de pinturas, los objetos de escultura que no son de primer orden, los dejará en las capitales de provincias bajo la dirección de las Diputaciones Provinciales*<sup>2054</sup>.

### **2.2.3.3. La génesis de una Administración tutelar del Patrimonio Monumental Expoliado: El papel de los Jefes Políticos Provinciales.**

<sup>2052</sup> Diario de las Sesiones de Cortes, Legislatura de 1822, Tomo II, Madrid, Imprenta de J.A. García, Madrid, 1872, Num.78, p.1155.

<sup>2053</sup> Diarios de las Sesiones de Cortes, Num.78, p.1555.

<sup>2054</sup> Diarios de las Sesiones de Cortes, Num.78, 3 de mayo de 1822, Tomo II, Madrid, 1872, pp.1555-1556.



Sería en el ámbito del Patrimonio Monumental donde encontramos uno de los capítulos más desoladores en aras a su conservación y protección por parte de la Administración. Como medida para paliar la destrucción patrimonial, se ordenaría a los jefes políticos provinciales que custodiasen e inventariasen los *archivos, cuadros, libros y efectos de bibliotecas*, no especificando nada sobre los edificios. Como apunta Francisca Hernández Hernández, *la cantidad de bienes enajenados en el trienio liberal tuvo que ser bastante elevada (...) desde el punto de vista del patrimonio monumental y artístico de la Iglesia la desamortización supuso un duro golpe para su conservación, puesto que se vio inmerso en el abandono más absoluto y envuelto en la especulación más descarada por parte de los grupos sociales que, de repente, se vieron enriquecidos. El expolio, las ventas fraudulentas, las especulaciones, las destrucciones de inmuebles y las pérdidas irreparables que el patrimonio religioso sufrió, junto con la supresión de las órdenes religiosas, supusieron un golpe mortal para el patrimonio*. Barros Caneda ha estudiado muy exhaustivamente los efectos que la desamortización va a provocar en el ámbito conventual del Puerto de Santa María (Cádiz), que supuso una amplia pérdida del Patrimonio Monumental. A partir de octubre de 1820 fueron cerrados tres conventos: Nuestra Señora de la Victoria, Santo Domingo y San Agustín, adquiriendo por el Estado un amplio número de bienes muebles e inmuebles. Como en el resto de la nación, se procedió a crear una Junta Nacional de Crédito nombraría dos comisionados para que se hicieran cargos de los bienes embargados, Wenceslao Helm, de la Junta Nacional de Crédito Público, y Pedro Manuel Medina de la Banda, vicario de la ciudad y agente del arzobispado de Sevilla. Helm se encargaría de las rentas y bienes raíces, mientras que De la Banda se ocupó de recoger todos los utensilios de cultos excepto las alhajas, que también pasaron al crédito público. Al mismo tiempo elaborarían un inventario de todos los bienes desamortizados, aunque se va a realizar dos, uno por el Vicario del Puerto, comisionado por Diego Hidalgo Baquero, Canónigo Secretario del Cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla y en presencia del prior del convento correspondiente y del notario Francisco de Paula Isola. A la hora de elaborar el inventario, se procedería a clasificarlo en varios apartados: orfebrería, vestuario, los altares y por último, las imágenes. A su vez, el Crédito Público confeccionaría otro inventario que en este caso se hacía más detallada. Con respecto a los bienes muebles, el Crédito Público cedió a la Iglesia los elementos del patrimonio correspondientes a *librerías, quadros, vasos sagrados, alhajas y demás utensilios pertenecientes al culto*, aunque las alhajas debían de ser entregadas al Comisionado del Crédito Público, con el objeto de darles un uso que no se especificaba en el expediente. El resto de los objetos debían de quedar en manos de las personas designadas por el Arzobispado para la custodia de los conventos. En el caso de Santa María de la Victoria, que fue abandonado, los objetos de cultos sería custodiado por el Vicario, Pedro Manuel Medina de la Banda. La ley desamortizadora dispondría que fueran

clausuradas las dependencias conventuales, exceptuándose las destinadas al culto público, ya que se consideraba de utilidad pública, al no considerarse como un ataque al credo religioso, sino a las manos muertas. De ahí que el alcalde del Puerto y el Comisionado del Crédito Público decidieron que las iglesias de los conventos de Santo Domingo y San Agustín permanecieran abiertas, *por el mucho avio que hacia al vecindario, principalmente la de San Agustín, como por evitar los prejuicios que podían seguirse de cerrarlas*. Sin embargo, el monasterio de la Victoria al estar afuera de la ciudad, quedó cerrado, trasladándose todos los bienes muebles a lugar seguro, al ser abandonado por los religiosos el 9 de junio de 1821<sup>2055</sup>. El destino de los objetos inventariados fue desconocido, ya que algunos se subastaron para sufragar las deudas públicas, otros se perderían y los restantes se dedicaron como culto de las iglesias que permanecían abiertas al culto. El bien inmueble más afectado de la medida desamortizadora sería Nuestra Señora de la Victoria, que quedó abandonado, sin darle un uso alternativo que le hubiera podido paliar el mal estado en que pronto quedó inmersa<sup>2056</sup>. Sin embargo, el despojo patrimonial que padecería los conventos del Puerto de Santa María habrían ya tenido su precedente en la propia invasión francesa que tomaría la ciudad como Cuarte General y en concreto, el Monasterio de la Victoria, como acuartelamiento de tropas por la que deterioraría el inmueble y los bienes muebles que contendría, y una vez salido las tropas francesas, por los propios lugareños que sustrajeron todos los bienes muebles a lo que se añadiría la propia actitud de los religiosos en los momentos anteriores a la propia desamortización en la que ocultaron y vendieron un gran número de bienes muebles. La desamortización del primer liberalismo solamente fue un escalón más en la pérdida del Patrimonio Monumental<sup>2057</sup>. Lamentablemente, el caso del Puerto de Santa María no fue una excepción, sino estos hechos se repitieron por toda la Península, como podemos citar el del Monasterio de Poblet o el de Santa María de las Cuevas (Sevilla)<sup>2058</sup>. La guerra civil española de 1822-1823 acentuaría la situación, especialmente en Cataluña que además del asesinato de varios clérigos serían cerrados un gran número de conventos. La llegada de los Cien Mil Hijos de San Luís en 1823 acrecentó aun más el problema, ya que por

<sup>2055</sup> BARROS CANEDA, José Ramón, “Incidencias de la desamortización de 1820 en el patrimonio artístico mueble de El Puerto de Santa María” *Historia del Arte y Bienes Culturales*, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Editorial Comares, Junta de Andalucía, Sevilla, 1998, pp.120-121.

<sup>2056</sup> El Monasterio de la Victoria del Puerto de Santa María, fundado en 1504, sufriría las distintas medidas desamortizadoras desde mediados del siglo XVIII hasta su desaparición: saqueado en 1702 durante la Guerra de Sucesión por los partidarios del archiduque Carlos, posteriormente por las tropas napoleónicas y finalmente la desamortización del siglo XIX. BARROS CANEDA, José Ramón, 1998, p.122.

<sup>2057</sup> BARROS CANEDA, José Ramón, 1998, p.124.

<sup>2058</sup> Los datos sobre la pérdida del patrimonio histórico durante el Trienio Liberal son demoledores: Durante este período se cerraron más de la mitad de los conventos y monasterios de toda España, siendo 801 edificios los que ya se habían confiscados a principios de 1822; Un gran número de conventos alejados de las capitales fueron abandonados, siendo objeto de saqueos por parte de las poblaciones locales.

un lado aceleró el expolio liberal de los conventos para conseguir recursos que pudieran hacer frente al ejército invasor, y por otro lado, el propio Duque de Angulema se llevaría algunas obras significativas, como un San Francisco de Asís, de Murillo. Con la vuelta al modelo absolutista tras el periodo liberal, se produce una recuperación de los bienes perdidos con la exclaustración, aunque prácticamente el daño ya estaba causado en muchos de los conventos expropiados. El balance que podemos en este periodo, es por consiguiente negativo en el ámbito del Patrimonio Monumental, y que lamentablemente en muchos puntos volvería a repetirse en las distintas desamortizaciones que se van a desarrollar durante el periodo de las Regencias.

#### **2.2.3.4. El destino de los bienes desamortizados: el ensayo frustrado del museo público.**

Al igual que en los casos de las desamortizaciones borbónicas y fernandinas, la cuestión primordial en relación al Patrimonio Histórico-Artístico Conventual estaba en el destino que se le iba a dar a estos bienes, por lo que durante la etapa fernandina se va a ir dinamizando la puesta en práctica de la vieja aspiración del idealismo ilustrado de mostrar con carácter público las colecciones de pinturas y esculturas que hasta ahora habían permanecido en el ámbito privado, y que por consiguiente podía ser una oportunidad hasta ahora no abordada prácticamente en el ámbito español. En este contexto cabe citar los intentos de fundación que se realizaron desde las instancias oficiales de un Museo de Bellas Artes en Sevilla, en la antigua iglesia del colegio franciscano de San Buenaventura, anterior al que después nacería en 1835, en el antiguo convento de la Merced, convirtiéndose en boca del cronista decimonónico Velázquez en un Museo de Ciencias y artes liberales y mecánicas. Sin embargo, como apunta Nicholas Tromans, *dada la escasez de documentación, y teniendo en cuenta el breve tiempo que duró entre 1822 y la evolución del Trienio durante 1823, parece poco probable que funcionara como museo público propiamente dicho*<sup>2059</sup>.

#### **2.2.4. Una nueva devolución de los bienes conventuales del Patrimonio Monumental durante la década absolutista: Real decreto de 24 de octubre de 1823.**

En 1823, la desamortización quedaría anulada al volver el régimen absolutista de Fernando VII. Entre las medidas cabe mencionar la modificación del diezmo por orden del 6 de junio, la reposición de todos los institutos religiosos por el Decreto de 11 de junio, y el 12 de agosto, por el que se solucionaba el pago de los frutos pendientes para compradores o instituciones a quienes se restituyan las fincas. Una Real Orden de la Regencia fechada el 15 de agosto de 1823 anuló los decretos desamortizadores de 1820. El 1 de octubre de 1823 se declaraba nulo todos los actos del gobierno

---

<sup>2059</sup> TROMANS, Nicolás “Un museo en Sevilla en 1822” *Goya*, 282, Madrid, 2001, p.159.

constitucional<sup>2060</sup>. La restitución de bienes eclesiásticos va a suponer la recuperación de algunos bienes muebles e inmuebles de interés histórico y artístico por parte de algunas comunidades religiosas, como fue el caso significativo en el ámbito sevillano de la restitución de los bienes al Monasterio de San Jerónimo el 29 de julio de 1823, por lo que a instancia de una exposición hecha por Fr. Alonso de Santa María, Procurador de la Orden de San Gerónimo, sería comunicada una orden a los Intendentes del Reino para que fueran entregadas *todas sus casas y demás que les pertenecía antes de su supresión*, por lo que *enterada S.A.S. se ha servido resolver que a la referida Orden se la reintegre en la plena posesión de todos sus monasterios, bienes, muebles, raíces, acciones y derechos hayan sido enajenados o no, extendiéndose esta disposición no solamente a los países libres, sino también a los ocupados que se vayan evacuando*, por lo que el padre vicario del convento de San Gerónimo de Buenavista pediría que fueran devueltos *con las demás pertenencias, la estatua del Patriarca, las pinturas y demás efectos de que se despojó a su monasterio y supone depositados en el Colegio de San Buenaventura*, recuperando temporalmente la imagen de San Jerónimo que tuvo que ser trasladada al monasterio de Santa Paula, al no ser habilitado su templo.

### **2.3. Un ensayo frustrado del sistema administrativo de protección del Patrimonio Monumental Eclesiástico y su confrontación con los intereses de los particulares durante la etapa de las Regencias.**

En la historiografía tradicional a la hora de abordar el problema de la desamortización eclesiástica se ha referido a la destrucción patrimonial, culpando especialmente a la frágil respuesta que dio el Gobierno al problema de la conservación de los bienes desamortizados, como todavía recientemente podemos percibir por parte de algunos investigadores como es el caso de Francisco Javier Caso quien *Llama la atención el escaso interés nominal suscitado en la legislación desamortizadora por los bienes relacionados con e inmenso patrimonio artístico y cultural existentes en las propiedades de las instituciones de la Iglesia española, debiendo de haber sido un tema especialmente tenido en cuenta, y recogido adecuadamente en la normativa, para evitar la pérdida el robo y la destrucción, lo que hace sospechar con cierto fundamento que el móvil que desencadenaba el hecho era sencillamente de tipo político, económico y antirreligioso (...)*<sup>2061</sup>. Sin obviar las pérdidas del patrimonio histórico y artístico, especialmente conventual, que supuso las medidas desamortizadoras, no cabe duda que al mismo tiempo se pusieron en marcha una serie de medidas, algunas ya heredada de las etapas anteriores, que abrió el camino hacia un sistema de administración tutelar del Patrimonio

<sup>2060</sup> PESET, José Luis “Legislación contra liberales en los comienzos de la década absolutista (1823-1825)” *Anuario de historia del derecho español*, 37, 1967, pp.437-485.

<sup>2061</sup> CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA, OSA, F. Javier “Textos legales de las desamortizaciones eclesiásticas españolas y con ellas relacionadas”, *La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España*, Real Centro Universitario Escorial, Symposium, 2007.

Monumental, que tendría su culminación en la etapa isabelina. Y es que ante las circunstancias expuestas por los autores románticos, el Gobierno Liberal no quedó impasible, por lo que intentó paliar el problema que se planteaba con algunas medidas, que aunque aparentemente no resultaron eficaces, al no crearse un verdadero aparato institucional de protección de los bienes patrimoniales de carácter histórico-artístico, en algunas cuestiones se adelantaría al proceso de institucionalización patrimonial de la etapa isabelina.

Entre el periodo 1833-1845 se va a configurar lo que Baena del Alcázar define como la *década increíble* en el ámbito de la historia de la administración española, ya que en esta etapa se crearía el derecho administrativo propiamente dicho; las antiguas secretarías de ministerios se transformarían en ministerios, se separarían los asuntos judiciales y los administrativos, surge la división provincial por Javier de Burgos, con lo que se perfila la administración propiamente liberal en el territorio español, que iba a sustituir la vieja administración del Antiguo Régimen. No cabe duda que las circunstancias de inestabilidad política y social a raíz de las guerras carlistas se convirtieron en un verdadero obstáculo a la hora de planificar una verdadera administración pública de carácter moderno<sup>2062</sup>. Podemos afirmar tajantemente que la puesta en marcha de un aparato administrativo de tintes modernos en la España de las Regencias repercutió plenamente en el ámbito de la tutela del patrimonio monumental. Tradicionalmente se ha potenciado la idea de que no sería hasta la etapa de la mayoría de edad de Isabel II cuando surge una verdadera administración tutelar, pero no por ello no dejamos de apreciar en esta etapa los intentos de crear una verdadera articulación de órganos administrativos específicos en orden a conservar y proteger los bienes históricos-artísticos de la nación, cuyos primeros pasos indudablemente se habían dado en las etapas anteriores. Sin embargo, hasta este momento la tutela pública de los bienes históricos-artísticos había sido en cierta manera muy superficial, cuya acción administrativa está definida por actuaciones aisladas, a instancias de instituciones históricas y artísticas, pero en este momento se va a encontrar con un problema real, las distintas medidas desamortizadoras, y va a tener que dar una respuesta clara con el destino de los bienes nacionalizados, y para ello necesitará delimitar un verdadero aparato administrativo que gestione la tutela del Patrimonio Monumental. Aunque ya se contaba con los precedentes del Trienio Constitucional, e incluso con las medidas desamortizadoras de los Borbones, y la experiencia bonapartista, es en este momento cuando se produce el arranque definitivo de una institucionalización administrativa de carácter

---

<sup>2062</sup> BAENA DE ALCAZAR, Mariano Prólogo en José María García Madaira: *Estructura de la Administración central (1808-1931)*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1982, pp.7-9; la generación primitiva de administrativistas y la moderna ciencia de la Administración en GIL CREMADES, Juan José; NAGORE LAIN, Juan José; SEOANE VACAS, Coral; VICENTE Y GUERRERO, Guillermo en *La configuración jurídica del Estado Liberal en España*. Actas del Congreso en Conmemoración del segundo centenario de D. Alejandro Oliván (1796-1996), p.147

moderno en el ámbito de la tutela pública. No por ello, el Estado nuevamente como ocurrió en épocas precedentes se va a encontrar con graves problemas a la hora de poner en marcha el aparato institucional.

1º) Las circunstancias bélicas que estaba sufriendo en este momento el país, causadas por la primera guerra carlista, impide que la actuación de las diferentes instituciones puedan llevar a cabo con buen término muchas de las gestiones encomendadas.

2º) La falta de coordinación de las distintas instituciones, incluso con conflictos jurídicos entre ellas, y el desentendimiento de las propias autoridades civiles no ayudaron a delimitar la protección y conservación de los bienes históricos-artísticos.

3º) Las circunstancias drásticas que estaba padeciendo la Administración española, necesitada de una amplia reforma que no llegaba.

En líneas generales el organigrama administrativo del Patrimonio Monumental Desamortizado se articularía a través de las siguientes instituciones: El Ministerio de Hacienda, a través de los intendentes, comisionados y contadores de arbitrios, se haría cargo de aquellos bienes destinados a la amortización de la deuda, mientras que al Ministerio de Gobernación, por medio de las comisiones civiles designadas, se encargarían de los bienes históricos-artísticos. Los obispos se encargarían de los objetos litúrgicos, vasos sagrados y ornamentos. Al mismo tiempo también intervendrían la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que desempeñaría un papel predominante, y en menor medida, la Academia de la Historia y las Sociedades Económicas. Las comisiones civiles, a las órdenes del Ministerio del Interior, se encargarían de recoger bajo inventario los objetos destinados a las ciencias y a las artes. Inventariaban y recogían los objetos artísticos, esculturas, pinturas y bibliotecas de los monasterios y conventos o cualquier otro objeto digno de ser conservados.

### **2.3.1. El despertar de la conciencia pública del Patrimonio Monumental Desamortizado.**

Sin ninguna duda podemos afirmar como la experiencia desamortizadora conventual que se dio en la etapa de las Regencias de la Reina Madre María Cristina y posteriormente del general Espartero durante la minoría de Isabel II podemos definirlos como un primer paso a la hora de considerar el Patrimonio Monumental como Bien de Interés Nacional. No cabe duda que ya se había iniciado anteriormente en los procesos desamortizadores anteriores, pero en este momento el mayor número de bienes que va a ser adquirido a lo largo de este periodo. La naturaleza jurídica del Patrimonio Conventual Desamortizado no solo ha cambiado de propiedad, sino que ha sido insertado en una nueva categoría que poco a poco se irá perfilando durante el



periodo isabelino, como es su identificación jurídica como Patrimonio del Estado. Sin embargo, creemos que es más claro definir estos bienes históricos-artísticos más como bienes de interés nacional que como bienes de interés público. El Estado va a asumir la responsabilidad de conservar y protegerlos no en nombre de la colectividad, o sea de la ciudadanía, siguiendo el espíritu constitucional contemporáneo de promover el interés cultural por parte de la Administración, sino que lo hará con una finalidad política primordial: la consistencia de la identidad nacional, siendo la Nación el nuevo sujeto que se irá fortaleciendo en el nuevo régimen liberal que los llevará a la constitución definitiva como Estado Nación ya en la etapa de la mayoría de edad de Isabel II. Evidentemente no todos los bienes desamortizados que pertenecieron al Patrimonio Conventual no serán considerados dignos de considerarse bienes de interés nacional, sino que solamente los de mérito artístico e histórico serán los que tendrán que conservarlos, y aunque en principio las Academias de Bellas Artes, tanto la de Madrid y las provinciales, como en un segundo lugar, la de la Historia, sean las encargadas de hacerlos, en la práctica muchos de sus informes no serán oídos, al prevalecer en muchos casos otros intereses como fueron los económicos. De ahí que la rapiña, la dejadez de la Administración, valoraron más la cuantía ganancial de un bien que su impronta como valor artístico o histórico.

En cierta manera nos puede recordar el proceso desamortizador a los momentos vividos en los años de máxima agitación revolucionaria francesa, donde al mismo tiempo que se fueron perdiendo gran número de bienes, se fue despertando un interés primordial en conservar aquellos que podían identificarse con la nueva identidad nacional que había nacido de las cenizas del derrumbe del Antiguo Régimen. Como apunta Josefina Bello el balance cultural de la desamortización tiene una doble lectura. Por un lado significó un empobrecimiento del patrimonio artístico y literario causado por vías diferentes, sin que sea fácil determinar su alcance, ni siquiera de un modo aproximado; por otro, la transferencia de los bienes culturales de mano de las comunidades a manos del Estado para ponerlos al servicio de la colectividad por medio de los museos y bibliotecas provinciales, que en una primera instancia se van a nutrir de los fondos procedentes de los monasterios y conventos, sería uno de los aspectos más positivos de la operación. El carácter religioso de la mayoría de las obras, sobre todo en el caso de los museos, muestra la gran relación existente hasta ese momento entre el Arte y la Iglesia. La constitución de museos y bibliotecas públicas se puede considerar como uno de los primeros proyectos de carácter cultural y artístico al servicio público en manos del Estado y de las instituciones provinciales<sup>2063</sup>.

### **2.3.1.1. Un nuevo capítulo de destrucción patrimonial español.**

---

<sup>2063</sup> BELLO, Josefina, *Frailas, intendentes y políticos: Los bienes nacionales, 1835-1850*, Madrid, Taurus Ediciones, 1997, pp.362-363.

Con las medidas desamortizadoras que dio lugar a una gran pérdida del patrimonio inmobiliario de carácter conventual, tuvo una importante repercusión en los marcos urbanísticos españoles. El profesor de historia del Derecho D. Jesús Urrea apunta que estas medidas hicieron una auténtica mella en el patrimonio histórico-artístico, tanto por la vía de la destrucción como por la derivada de su dispersión, que aunque hoy no se puede cuantificar la pérdida en términos concretos, *si es demostrable el descabalamiento producido, la confusión originada, el olvido desencadenado sobre tantas obras que han perdido su misma historia, el tráfico originado, las multiplicaciones sufridas por los conjuntos, etc.*<sup>2064</sup>. Martín González analizó en un interesante artículo publicado en 1978 las irremediables pérdidas que supuso los bienes del patrimonio histórico-artísticos<sup>2065</sup>. Así la venta de conventos, monasterios y hospitales, suministró abundantes solares al convertirse como tales las huertas de éstos, o los propios edificios, tras su derribo, generándose la configuración de plazas o nuevas calles que dieron paso a las nuevas prácticas urbanísticas, que posteriormente se consagraría en la etapa isabelina. Los edificios que se mantuvieron en pie, algunos fueron adquiridos por el capital privado, destinándolos a viviendas, fábricas, talleres e incluso a teatros, o por la propia administración pública, para albergar Escuelas Municipales, Institutos, Juzgados, Cárceles, cuarteles o Museos. Un gran número de templos si pudo salvarse de la destrucción, convirtiéndose bien en Ayudas de parroquias, o incluso en algunos casos se devolvió a las autoridades eclesiásticas, para utilizarlo al Seminario. Los monasterios que se encontraban en extramuros de la ciudad padecieron aun más el despojo de su patrimonio, al quedar en la mayoría de los casos abandonados. Una fuente primordial para conocer el destino de la mayoría de los bienes inmuebles de carácter conventual sería el Diccionario Geográfico de Madoz. En el ámbito andaluz, cabe destacar el reciente estudio publicado por Fernando Acale Sánchez sobre las transformaciones urbanísticas de la Granada del siglo XIX, en la que se insertan innumerables casos del destino de muchos de estos conventos. Así el 27 de diciembre de 1836, un año después de ser exclaustrado, se derribaría el convento de los agustinos, apareciendo en el Boletín Oficial de la Provincia el motivo de su desaparición en los siguientes términos: *El antiquísimo y ruinoso edificio del convento de Agustinos calzados debe de ser demolido(...) para que desaparezca la fealdad que ofrece por su espalda y callejuelas, muy propósito para guaridas de ladrones que es lo que han servido hasta ahora; y haciéndose una gran plaza con su fuente, se ennoblecerá aquel punto central del pueblo.* La configuración de la plaza se haría al poco tiempo, siendo denominada del Progreso, y ya en 1880 se establecería el mercado de San Agustín. En otros casos eran adquiridos por los particulares, que en muchos casos vendieron el inmueble, que suponía

<sup>2064</sup> URREA, Jesús “La desamortización y la conservación de los bienes artísticos muebles” en *Historia de la Propiedad. Patrimonio Cultural*. Madrid, 2003. p. 163.

<sup>2065</sup> MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. “Problemática de la Desamortización en el arte español” *Actas del II Congreso Español de Historia del Arte*, 11 14-X-1978, Valladolid, 1978, pp.16-29.

el derribo del mismo, incluso algunas iglesias<sup>2066</sup>. Recientemente ha sido analizado el destino de los bienes inmuebles conventuales en la ciudad de Valencia entre 1837 a 1839, que nos puede servir de ejemplo para otras poblaciones españolas. Dos de los mejores conventos que estaban ubicados en el intramuros de la ciudad, el de Santo Domingo y el de San Francisco, se les reservaría el Estado para instalaciones militares. Otros cenobios, como el del Carmen, sería acondicionado como museo provincial, en cuyo templo se instalaría la vieja parroquia de Santa Cruz, o incluso se situarían instalaciones benéficas. Un gran número de bienes inmuebles serían vendidos por la Junta de Enajenación a los particulares, perdiéndose de este modo un amplio bagaje del Legado Patrimonial, al no ser considerados bienes de interés cultural. La adquisición de los propios materiales de los antiguos inmuebles conventuales sería uno de los objetivos de su compra por comerciantes enriquecidos, como fue el caso de Pedro Henrich, del ramo de comercio de Valencia, que solicitó al gobierno la solicitud del edificio y el huerto de varios antiguos conventos, accediendo a tal petición en virtud de la real orden del 10 de agosto de 1838, con el objeto de establecer en la propiedad una fábrica de hilados de sedas. Nuevamente el 25 de septiembre siguiente, Heinrich solicitaría la tasación del conjunto, mediante un arquitecto designado por la junta de enajenación y otro por él mismo como parte interesada, siendo nombrado por ambas parte el mismo arquitecto, Joaquín Cabrera de Laraiche, quien el 28 de octubre lo valoraría en 150.588 reales, comprendiendo el huerto con sus paredes, cabidas de tierra y riego en 33.000 reales, y el convento con su iglesia en 117.588 reales. Se aceptaría el justiprecio de Cabrera por parte de la Junta valenciana, presidida por el intendente de la provincia, Juan García de Barzanallana, por lo que sería enajenada el 9 de noviembre de 1838, perpetuamente al censo reservativo por la cifra acordada de la tasación con el canon anual de tres por ciento.

En los diferentes Informes de los Arquitectos en cargados de la tasación se puede apreciar los elementos valorativos que han utilizado como referencia para la adquisición del bien inmueble conventual: la calidad de los materiales, la distribución y ubicación del monasterio para poder ser transformado para su nuevo uso: *pero al verificarlo así no han podido ni debido olvidar tampoco que el verdadero, el legítimo valor de una obra cualquiera en la época de su apreciación no depende sólo de su apreciación y clase de sus materiales, de los que éstos y los brazos empleados pudieron costar cuando se fabricó; éste es un dato pero no el único: su distribución y su situación influyen muy poderosamente en la mayor o menor utilidad que de todas las obras se puedan sacar, y su utilidad marca en general los límites de su aprecio: al edificio de Jesús puede habersele dado en su tiempo otra distribución muy diferente, y muy a propósito que la que ahora tiene para cualquier ramo de industria empleando los mismos materiales y sin variar su coste, y así como entonces,*

---

<sup>2066</sup> BARRIOS ROSUA, Juan Manuel *Reforma urbana y destrucción del patrimonio en Granada*

*construido de esta manera no hubiera sido tan útil, tan apreciable para Convento, tampoco ahora contruidos para dicho efecto, pudo serlo tanto para ningún otro ramo, mayormente cuando ha desaparecido el objeto para que se fabricó; además el propio edificio de Jesús, aun con la distribución que actualmente tiene, colocado en cualquier calle de Valencia, en cualesquiera de los arrabales, ¿Quién duda que sería generalmente útil para mayor número de usos?, ¿Qué sería más apreciable?, pues bien su coste habría sido el mismo.* El principio de utilidad nuevamente impera en el Informe del arquitecto Antonio sancho sobre el convento de Trinitarios de Valencia de 12 de marzo de 1839: *Según esta breve reseña, la Junta podrá juzgar de las principales condiciones del edificio y deducir la especie de ventajas que pudiera reportarles en cualquier clase de enagenación; y como no sea para el aprecio de estas fincas pagarlas de otro modo que puramente como objetos de utilidad, he tenido en consideración, lo primero lo que puede producir en su actual estado, segundo lo que se conseguiría con obras capitales de transformación y el coste de éstas, y por último, la importancia del terreno dentro de la población (...).* En el Informe sobre el convento de San Juan de Ribera del 26 de junio de 1838 se aludía nuevamente la primacía del interés del Estado a pesar de que fuera adquirido por un particular: la circunstancia particular de que este Convento fue extinguido antes que el plan de su fábrica llegara a realizarse en su totalidad ha contribuido, en concepto nuestro, para que los daños causados en él, así como la estancia accidental de tropas y Brigadas del Presidio, como por invasiones nocturnas, hayan sido de más trascendencia, y ella misma nos convence de que, si con prontitud no se cede esta finca al interés privado, la Nación perderá dentro de poco un capital importante, cuando aplicada aquella a un establecimiento fabril de utilidad general, a que indudablemente convida por su situación, amplitud y ventilación, producirá resultados muy interesantes.

#### **2.3.1.2. Una nueva concienciación patrimonial El papel de las revistas románticas en la protección patrimonial: Los artículos de Cardera y el Manifiesto de Larra.**

A lo largo de los primeros decenios del siglo XIX nacerían al amparo del ideal romántico, un gran número de revistas donde se insertaban, entre otros, artículos de claro referente proteccionista, como *No me olvides* (1837-1838), *El observatorio pictórico* (1837), *El liceo artístico y literario* (1838), *El alba* (1838-1839), *El panorama* (1838), etc. Como ya apuntaba Calatrava el conjunto de artículos que encerraban todas estas producciones han sido estudiados desde una perspectiva ciertamente literaria, no habiéndole dado la importancia que tuvieron a la hora de conocer la dimensión estética y patrimonial que en estos textos se deduce<sup>2067</sup>. Sin duda alguna la más conocida y la más antigua fue la revista *El Artista*, publicada entre 1835 y 1836, insertando sus posiciones en un contexto típicamente romántico, siendo su

<sup>2067</sup> CALATRAVA, J.A. *La visión de la historia de la arquitectura española en las revistas románticas* en VV.AA. *Historiografía del Arte Español en los siglos XIX y XX*. Madrid, 22-25 de noviembre de 1994. Actas de las VII Jornadas de Arte, 53-62. Madrid, 1995.

mayor preocupación reconstruir lo que de aprovechable pudiera haber del pasado artístico nacional, continuando de este modo los trabajos de rehabilitación artística que habían comenzado Ponz y Jovellanos en el siglo anterior. En la revista se insertaban descripciones de antiguos edificios y restos arqueológicos, ilustradas a veces con estampas litográficas y abriría el camino al conocimiento del arte a amplios sectores de la población<sup>2068</sup>. Muy ilustrativo de la situación que se estaba viviendo en estos años la devastación patrimonial es el artículo titulado *Demolición de conventos*, publicado por Pedro de Madrazo en 1835, donde el autor expresa una verdadera elegía de la pérdida patrimonial, muy en línea ideológica del primer romanticismo, al exaltar los valores estéticos de un pasado que se pierde, al mismo tiempo influenciado por los matices políticos de corte liberal, al criticar al estamento religioso, que impedía en cierta manera la modernización de España<sup>2069</sup>. A continuación, el autor surgiera cual podría ser el destino de estas obras expoliadas, para lo que el Estado tendría que tomar una serie de medidas, entre ellas la creación de un museo donde podrían ser conservadas y expuestas las obras artísticas, que hasta este momento habían estado ocultas<sup>2070</sup>.

Quizás en el artículo que V. de Cardedera escribiera en la revista *El artista* en 1836, levantaba la voz sobre la destrucción de los conventos, nos da una importante radiografía de la verdadera realidad de protección de los bienes desamortizados. En los primeros párrafos ya surge la inutilidad de las disposiciones legales puesto por el Gobierno, al no ser verdaderamente cumplidas: *Si bien el gobierno ha tomado providencias generales para la reunión y recolección de los monumentos de artes, preciosísimos muchos de ellos y de la mayor importancia, que encierran los monasterios y conventos suprimidos, creemos de nuestro deber hacer serias reflexiones y aun dar oportunos avisos para que, aunque se observen exactamente las instrucciones del gobierno, no se menoscaben, se extravíen o se arruinen totalmente muchos objetos de arte. La experiencia nos ha hecho ver, en las pasadas épocas, cuanto se han eludido las providencias del gobierno; alguna culpa han tenido las autoridades y gefes de provincia, entre los cuales, pocos son los que se dan mucha importancia a estas cosas y los que tienen toda la cultura necesaria para apreciar lo bello, aunque adornados por otra parte de otros talentos y méritos útiles del estado. Al mismo tiempo se lamenta del estado deplorable en que se encontraban muchos bienes artísticos, especialmente por el poco conocimiento científico y técnico de la obra de arte tenían los*

---

<sup>2068</sup> GONZALEZ GARCÍA, Angel; CALVO SERRALLER, Francisco *Estudio Preliminar* de la reedición de *El Artista*, Madrid, 1981. P. XIV.

<sup>2069</sup> Sobre la figura de Pedro Madrazo, Calvo Serraller, Francisco *Pedro de Madrazo, historiador y crítico de arte de naturaleza romántica* en *La imagen Romántica de España*, Madrid, 1995, pp.155-162. A lo largo de su vida se dedicaría a la difusión y estudio de las obras de artes, en un momento en que todavía la historiografía artística española no estaba configurada como disciplina científica. Con solo diecinueve años fue ya un colaborador habitual de la revista *El Artista*, comenzaría a realizar una serie de artículos sobre el patrimonio artístico español y la destrucción del mismo.

<sup>2070</sup> MADRAZO, Pedro de, 1835, pp.98-100.



encargados de su protección: *¡Cuántas veces hemos vistos preciosos lienzos, excelentes esculturas, códices y miniaturas interesantísimas en libros de coro, llegar al lugar del depósito enteramente arruinados! Las bellas producciones de cincel de los Berrugetes, de los Siloes y de aquella gran escuela, mutiladas sus manos y cabezas; faltos de hojas y de sus preciosas miniaturas aquellos magníficos salterios, y aquellos curiosos manuscritos que constituían en un tiempo una de las principales alhajas de las familias (...) La mayor parte de los recolectores de tales preciosidades, ignorantes del mérito y de otras cualidades de alto interés para la historia nacional y para la de las artes, abandonaban a la intemperie y a su destrucción objetos antes, por fortuna tal vez, ignorados y abandonados. Incluso arremete con los mismos profesionales del arte que en muchas ocasiones por no darle la importancia que tenían algunos objetos artísticos dejaron que desaparecieran o incluso fuesen mutilados: No se crea por esto que todos los que se llaman pintores, escultores y arquitectos sabrían remediar tamaño inconveniente. ¡Cuántos en estos años pasados, sobre todo en algunas provincias, hemos visto, con manos sacrílega, borrar y sustituir con sus groseros pinceles producciones sobrehumanas, aunque selladas por la mano destructora de los siglos!! ¡Cuántas estatuas desterradas a los sótanos, mutiladas y aun calcinadas, para reemplazarlas con informes y ridículas efigies! ¡Cuánto arquitecto indigno de tal nombre, maestro de obra, tallista, y demás, por haber comprendido un miserable manual de Vignola, sustituir detestables altares a la moderna para arrinconar los antiguos y los sepulcros suntuosos, y otras antiguallas venerables! ¡Cuántos, cuantos de entablamentos, columnas, pedestales y otros objetos labrados en piedra con indecible primor hemos visto picados, estropeados y desfigurados para servir de apoyo, de pavimentos, y de escalones!!! No pocos profesores, aun entre los más distinguidos, han desconocido el mérito e interés que encerraban un gran número de objetos de artes. El sistema de escuela en que se educaron ha contribuido a hacérselos deprecia, con gran detrimento de las artes. Es bien sabido que muchísimo monumentos preciosísimos, pues que conservaban retratos de nuestros héroes, que nos podían servir de segura tradición para conocer nuestros antiguos trages, usos y costumbres; que nos revelaban el estilo, escuela y mecanismo del arte; y en fin, podían servir de guía para calificar e ilustrar otras obras de mayor interés han sido desechados, abandonados y han perecido porque aquella manera gótica no era del gusto de los profesores ni de los que inspeccionaban tales objetos. Al mismo tiempo denunciaba la rapiña patrimonial practicada por los funcionarios y encargados de salvaguardar las obras de arte, que muchos de ellos se dedicarían a malvender y enajenar sin ningún tipo de control administrativo: La poca vigilancia y ninguna honradez en algunos de los empleados y depositarios de tales objetos que podían salvarse del citado vandalismo, es otra plaga que todos los amantes de nuestra patria y de las artes deben lamentar. Entre el círculo de los que creen, que las bellas no es objeto que merezca la menor atención en una nación cuando le rodean otros peligros mayores, apenas pasa día que no se oiga hablar de adquisiciones de pinturas, de libros y de alhajas inestimables, y de otros objetos que en general codician muchos extranjeros que circulan en todas direcciones... ¿A qué otra causa puede atribuirse el haber desaparecido, aun después de la guerra de la independencia, de los castillos y palacios de nuestros próceres, tantas preciosas armaduras, que, aunque no estuvieran cinceladas por los Cellinis y otros buenos artistas, debían conservar los españoles con noble orgullo (...) No se*



*alucinen pues las autoridades que ven conducir numerosos carros de cuadros, esculturas y grandes in folios que hacen sudar a tanto ganapán para depositarlos en bien preparados salones. El mejor cuadro, la más linda y manuable escultura habrá desaparecido ya.... y á no ser por su gran dimensión o celebridad, pocas obras de escultura ni de pintura podrá reunir el celoso gefe que desee plantear un buen museo provincial; ni busque el instruido y docto bibliotecario que trate de formar una biblioteca, tan necesaria en cada capital de provincia (...).* El artículo acababa aconsejando al Gobierno Liberal que estableciera unas series de medidas de carácter técnicos: *Sería pues muy necesario que el Gobierno aplicase el oportuno remedio a los indicados peligros, enviando a las provincias, y comisionando en ellas a buenos profesores que hubiera, dotados de instrucción, probidad y decididamente amantes del arte. Estos deberían recorrer (en las provincias en que fuera posible) todos los conventos y monasterios, sobre todo, los que están en despoblado; dirigir la traslación o transporte de los objetos o admovibles; indicar las providencias necesarias para la conservación de algunos objetos inmuebles como algunos altares de mérito, sillerías de coro, sepulturas y depósitos antiguos y otras muchas otras cosas interesantes, que tal vez pasando a poder de arrendatarios u otros poseedores, se menoscaban o absolutamente se destruyan para formar viviendas o almacenes, etc. Algunos literatos y personas doctas serían también de infinita utilidad, pues además de ausilio que podrían prestar a los artistas, atenderían a las librerías y otros objetos científicos, podrían conservar o trasladar los escritos, lápidas, inscripciones o epitafios curiosos e interesantes, ya que por desgracia han quedado tan pocos (...).* Por consiguiente, V. de Cardera expresaba los problemas más relevantes que se planteaba en estos años a la hora de configurar un verdadero marco jurídico:

1º) La falta de una verdadera concienciación patrimonial en los ámbitos administrativos y políticos, que a pesar de que se fuera desarrollando unas medidas concretas de protección no se llegaban a ejecutar.

2º) La carencia de un verdadero desarrollo del conocimiento científico en el ámbito artístico, más cercano a la exaltación de los valores estéticos de algunos objetos concretos, y el consiguiente desprecios de otros, que de los verdaderos valores instrumentales que conlleva la obra de arte en sí.

3º) La ausencia de un verdadero personal administrativo que supiera conservar con la debida preparación las obras artísticas.

A pesar de ellos, la adquisición de estas obras artísticas supuso sin duda alguna una considerable pérdida del patrimonio histórico-artístico, y lo más penoso fue que a pesar del llamamiento que el propio Mariano José de Larra hizo en un artículo publicado el 3 de agosto de 1835 en la madrileña Revista Española, titulado *Conventos españoles, tesoros artísticos encerrados en ellos*, no tendría eco ni en el propio Gobierno, ni en los círculos culturales y artísticos, ni por supuesto en el pueblo llano: *¿Qué de riquezas literarias, históricas, artísticas no encierran esos conventos, destinadas acaso por una fatal imprevisión a ser presa algún día de las llamas o del convento? Riquezas en*

*arquitectura, en escultura, en pintura, en manuscritos, en medallas, en archivos y riquezas todas españolas, nacionales, riquezas que saben apreciar los extranjeros, que vienen a estudiarlas, a diseñarlas, a sustraerlas a veces para exportarlas a sus países, para especular sobre ellas con vergüenza nuestra (...). No podemos menos de llamar la atención de nuestro gobierno (...) ¿No pudiera nombrarse una comisión civil, compuesta de hombres probos, encargada de recorrer esos conventos, cuyos institutos misteriosos han podido hasta ahora ocultar y conservar casi secreto cuanto en sus muros se esconde, y de dar un destino más seguro a sus riquezas artísticas y literarias? Con tal que no fuera una Junta y tuviera que juntarse, en cuyo caso correrían el riesgo de llegar un poco tarde. ¿Qué no ha perdido la Francia por no haber pensado al principio de su revolución en un ramo tan importante? ¿Qué de quejas no lazan hoy al cielo, estériles ya por desgracias y muy tardías? No sabemos hasta que punto será apreciado nuestro patrimonio (...) pero sí nos apresuraremos a hacer presente al gobierno, para excusarnos de visionarios, que esos mismos extranjeros que creen conocer nuestra posición se ocupan en el día en salvar esos tesoros artísticos de nuestra España; pero en salvarlos para ellos. Sabemos positivamente que un establecimiento literario en París trata de enviar a nuestro suelo (...) comisionados encargados de diseñar o de comprar a cualquier costa cuanto puedan encontrar en punto a cuadros y manuscritos, etcétera, etcétera. Hagamos, pues, nosotros lo que los extranjeros piensan hacer, y apresurémonos, porque acaso (...) el día de enmendar una imprevisión, si la cometiésemos, no volvería a presentarse jamás<sup>2071</sup>.*

El manifiesto de Larra podemos considerarlo como el primer gran testimonio de la pluma española sobre la auténtica realidad que vivía el patrimonio conventual, instando al Estado a que adoptara las medidas oportunas para su protección. De gran fuerza expresiva es el fragmento del artículo de Usoz y Rios, publicado en 1836, con el título *¿Bajo qué sistema de gobierno prosperan más las Bellas Artes?: (...) Pero con lo que no prosperan las artes, según la común opinión de los autores, es, con destruir y quemar los monumentos artísticos que posee una nación. Por eso los pueblos y los hombres de la Antigüedad se condujeron de otro modo, que los filosóficos asesinos de frailes, e incendiarios de sus conventos. (...) Y es por cierto cosa bien singular, que mientras los curas y los frailes respetan y conservan con escrupuloso cuidado los objetos de bellas artes, que en la moderna Roma existen aun: se quemen en nuestra ilustre Patria, sedienta siempre de Libertad y de Gloria, lo que produjo el ingenio y el talento de los españoles que cultivaron las artes y las letras (...). Nos proponemos, en artículo separado, dar noticia de lo que ha parecido, en los atacados conventos de Cataluña y Aragón (...).*

### **2.3.2. La tutela pública del Patrimonio Monumental durante los gobiernos de Martínez de la Rosa y el Conde de Toreno: Las Comisiones Civiles.**

<sup>2071</sup> LARRA, Mariano José de *Conventos españoles. Tesoros artísticos encerrados en ellos*, en Revista Mensajero, 156, 3 de agosto de 1835.

Sería con el gobierno de Martínez de la Rosa cuando comienza las primeras medidas que se podrían calificar como desamortizadoras, aunque en la línea de Alejandro Nieto, serían muy moderadas y excepcionales que se basarían exclusivamente en la represión de los frailes facciosos, ya que *algunos conventos y monasterios han sido y son profanados con hechos y planes subversivos, deseando atender juntamente a la seguridad del Estado y al decoro y santidad de los claustros*. Ya anteriormente con **el decreto de 26 de marzo de 1834** se inician las primeras medidas desamortizadoras, al legalizarse la ocupación de los conventos abandonado en el escenario de la Guerra Civil, con la justificación de que algunas comunidades religiosas se pasarían al bando carlista. El destino de los objetos de cultos nacionalizados sería entregado a los diocesanos para que se repartiesen entre las parroquias más necesitadas, mientras que el resto de los bienes muebles, y los inmuebles serían vendidos en pública subasta<sup>2072</sup>. El gabinete de Martínez Rosa sería sustituido por el del Conde de Toreno, un gobierno breve, pero que tuvo una impronta importante en la política desamortizadora. **El 4 de julio de 1835**, por un decreto del Ministerio de Gracia y Justicia, presidido por García Herreros, se restablecería la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767, por la que todos los bienes de la Compañía serían ocupados y aplicados a la extinción de la deuda pública a excepción de los objetos artísticos y culturales que se entregarían a los institutos de la ciencia y de las artes, en la que constaba en el artículo 5º: *Se exceptúan, sin embargo, de esta aplicación las pinturas, bibliotecas y enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes, así como también los colegios, residencias y casas de la Compañía, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados, de los que me reservo disponer, oídos los ordinarios eclesiásticos, en lo que sea necesario y conveniente*<sup>2073</sup>. **La Instrucción del 13 del julio de 1835** encomendaría a los obispos de la recolección y objetos de carácter sagrado, ya que al igual que los bienes históricos-artísticos, no estaban sujetos a la venta, ya que eran destinados al servicios religiosos de los fieles, con la excepción de que fueran hecho de material precioso al ser considerado muy ostentoso para el culto, por lo que tomaría la decisión final los comisionados de Hacienda, medidas que provocarían la ruptura con la Santa Sede. Unos días después, se dictó la medida más importante, **el Real Decreto del 25 de julio de 1835** por lo que se suprimían los monasterios y conventos que no tuviesen menos de doce regulares profesos, con la excepción de las casas de clérigos regulares de las escuelas pías y los colegios de misioneros para las provincias

---

<sup>2072</sup> NIETO, Alejandro, 2006, p.491.

<sup>2073</sup> En Sevilla el decreto suprimiendo a la Compañía de Jesús se va a conocer el día 14 de julio, en la que se dispondría que *las pinturas, librerías y objetos de bellas artes* serían poseídas por el Estado, aunque no se consuma la supresión hasta el 19 de agosto. Curiosamente el obispo de la ciudad, Cienfuegos defendería a la Compañía en un escrito que enviaría a la Reina. Con la medida en el caso hispalense se van a ir perdiendo nuevamente patrimonio, en este caso inmobiliario, afectando al colegio de San Luis. FRAGA IRIBARNE, Mª Luisa, 1993, p.46.

de Asia<sup>2074</sup>. Como apunta Nieto, la medida todavía *no afectaba a las órdenes religiosas sino únicamente algunos de sus conventos*, presentándose como una ejecución de la voluntad de los Sumos Pontífices. El artículo 7º fue determinante para el destino del Patrimonio Histórico-Artístico de estas comunidades, ya que se excluían del proceso nacionalizador los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que pudiesen ser útiles a las ciencias y a las artes, así como las iglesias y monasterios o conventos y los objetos religiosos. Las parroquias, dependientes de los monasterios y conventos, pasarían a la condición de seculares (art.6). Se crea un instrumento vital para la ordenación del patrimonio expoliado, la Real Junta Eclesiástica.

Con la **Real Orden del 29 de julio de 1835** se van a crear las Comisiones Civiles, que debían acompañar a las Comisiones de Amortización, formada por tres o cinco miembros con el fin de que ayudase al Gobernador Civil en su tarea de salvaguardia del patrimonio, *los cuales tengan a su cargo examinar, inventariar y recoger cuanto contengan los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos, y las pinturas, objetos de esculturas u otros que deban conservarse* (1º). Al mismo tiempo se va a recomendar a los gobernadores que vinculara en su misión algunas instituciones culturales que pudieran colaborar en la tarea de selección patrimonial que debía de proteger, como fueron las academias, tanto de bellas artes o literarias, los archivos y las sociedades económicas. En el caso de no haber en su provincia estos cuerpos, nombrara V.S. directamente los comisionados, eligiéndolos entre las personas que por su ilustración y gusto acreditado le merezcan mejor opinión y más confianza (3º). Una vez nombrado la Comisión, sus miembros acompañaría, *de acuerdo con el intendente acompañará a aquella a los comisionados de la dirección de la amortización que pasen a hacerse cargo de los conventos* (4º), con el objeto de elaborar inventarios, que serían separados, quedándose *uno en el archivo del Gobierno civil de cada provincia, otro en el de esta Secretaría del Despacho, y el tercero en las academias ó bibliotecas de esta corte* (5). Los objetos requisados en la provincia se remitirían a su capital, *en la que se depositarán en parage cómodo y seguro hasta que S.M., con conocimiento cierto y puntual de todo lo recogido, pueda darles el destino que mejor le pareciere* (6). Una vez inventariados y recogidos los bienes por las Comisiones Civiles, tenían como objetivo engrosarlos en los llamados *Institutos de ciencia y arte de la nación*, que en realidad pretendían ser los gérmenes de museos, bibliotecas y archivos públicos, que no llegarían a ponerse en muchos casos en marcha. Desde la Sección Cuarta del Ministerio del Interior se enviaría una comunicación al secretario del Despacho de Gracia y Justicia instando a la colaboración de los propios religiosos: *A fin de que tenga*

<sup>2074</sup> La exposición del Conde de Toreno del Decreto del 25 de julio justificaba la medida desamortizadora *como protectora de la Iglesia y de los cánones, de velar para que se cumplan puntualmente las disposiciones canónicas, haciendo cesar los abusos que se hayan podido introducir en la disciplina eclesiástica y transcurso de los tiempos*. Las razones estaban por consiguiente en el aumento de conventos y monasterios que se habían producido en estos años, el excesivo número de religiosos, puntos que ya se habían referidos en medidas desamortizadoras anteriores.

*mejor y más puntual cumplimiento aquella parte del Decreto del 25 del corriente en que se eximen de ser aplicados al pago de la deuda pública los Archivos, Bibliotecas, pinturas y demás enseres de las casas religiosas suprimidas, que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y arte, se ha servido S.M. determinar que por el Ministerio del cargo de V.E. se den a los respectivos prelados las órdenes conducentes á que no solo impidan bajo su responsabilidad que desaparezcan ninguno de dichos objetos, sino que formen listas separadas de ellos, y le entreguen á los encargados de recogerlos con todas aquellas noticias y antecedentes que por tradición o de otro modo hubieren llegado á ellos, y puedan contribuir a la ilustración de nuestra historia, en cualquiera de sus ramos*<sup>2075</sup>. La lectura del documento no plantea duda de la intención que la Administración tutelar nacida de la medida desamortizadora debía hacer sobre aquellos objetos que pudieran ser ilustrativos de la historia nacional. Como apunta Genaro Luis García López fueron nombradas pocas comisiones para la enorme cantidad de conventos que tenían que atender y las condiciones desfavorables de la guerra civil, ya que en la mayoría de los casos fue imposible que las comisiones llegasen a la población alejadas de las capitales provinciales, e incluso en las mismas capitales, en muchas ocasiones no llegarían a tiempo para la realización de los inventarios. Incluso se tuvo que recurrir a las Oficinas de Amortización para conseguir los inventarios que habían elaborado los comisionados de la Hacienda Pública, originándose los conflictos pertinentes entre Gobernación y Hacienda, e incluso eran generalmente menos detallados en los referentes objetos artísticos<sup>2076</sup>.

Con la **Real Orden de 9 de septiembre de 1835**, las iglesias de los conventos permanecieron en pie al considerarse parroquias, por lo que se consideraron edificios de carácter religioso, que como tales sobrevivirían a su demolición. Los prelados debían de enviar al Gobierno una lista de todas aquellas iglesias conventuales que podían funcionar como templos parroquiales, por lo que en la mayoría de las ocasiones intentaron salvar el mayor número posible de ellas, aunque siempre no se conseguiría. La Academia de la Historia también representaría un papel vital en la protección de los bienes incautados a los Monasterios, por lo que el 12 de diciembre de 1835, enviaría al Ministro del Interior un documento recordándole que la ley 3ª de la Novísima Recopilación le confería un papel predominante en la conservación de antigüedades, considerando que en las librerías y archivos de los monasterios y conventos habían un gran número de manuscritos y códices de gran interés para el conocimiento histórico. En la **Real Orden de 19 de diciembre de 1835** se establecía que se valgan los Gobernadores Civiles *con preferencia de los individuos correspondientes de la Academia de la Historia, si por otra parte no hallaren inconveniente, por ser ellos el mejor conducto para que este cuerpo literario adquiriera las noticias que puedan convenir al objeto de su instituto.*

---

<sup>2075</sup> GARCIA LOPEZ, Genaro Luis, 2004, pp.46-47.

<sup>2076</sup> GARCIA LOPEZ, Genaro Luis, *La lectura como servicio público: análisis de la Administración pública en los orígenes del sistema bibliotecario*, Gijón, 2004, pp.80-81.



Solamente pudo actuar sobre la ciudad de Madrid, mientras que en el caso de la de Bellas Artes de San Fernando se extendió por todas las provincias<sup>2077</sup>. Sin embargo, la intención tutelar quedaría como va a ser constante en este momento en un cumulo de buenas intenciones, ya que las comisiones civiles tendrían muchos problemas a la hora de realizar su actividad, e incluso en algunas provincias no pudieron crearse y donde sí lo hicieron se verían muy limitadas por la falta de medios y de colaboración de otras instituciones. Como apunta Genaro Luís García entre los múltiples problemas que se va a encontrar a la hora de confeccionar el inventario y la recolección de los bienes desamortizados estarían la escasa colaboración de los religiosos, la simultaneidad en la supresión de los conventos, el escaso interés de la propia Administración, la descoordinación entre los diferentes ramos de la Administración, la escasez de recursos económico, y la propia guerra civil en que estaba insertada el país<sup>2078</sup>.

En los últimos días del gobierno Toreno, se dictaría un nuevo Decreto ordenando la devolución de los bienes de los conventos que habían sido vendidos, amparándose en la legislación del Trienio entre octubre de 1820 y fin de septiembre de 1823, momento en que Fernando VII había detenido el proceso desamortizador. La medida probablemente también afectaría al Patrimonio Monumental. Un caso paradigmático lo encontramos en el ámbito de Sevilla, concretamente en la venta de parte del antiguo convento de dominicos de Montesión, ya en el periodo del Trienio Constitucional (1820-1823), que sería vendida en subasta, cuyo último remate se celebró el 1 de febrero de 1823, siendo adjudicada al Marqués de Arco Hermoso, en la cantidad de 140.614 reales de vellón, que adquiriría todo el convento, exceptuando el templo. Una vez abolido el sistema constitucional con la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, serían restablecidos los monasterios y conventos suprimidos, y reintegrados sus bienes y anuladas las ventas de los llamados bienes nacionales, por un decreto de 1 de octubre de 1823, por lo que por su cumplimiento el Marqués sería despojado de su finca, hasta que la Reina Regente, por decreto de 3 de septiembre de 1835, y posteriormente la Ley de 1 de enero de 1837, serían declaradas todas las ventas hechas durante este periodo, por lo que a los compradores que habían adquirido durante el Trienio Constitucional sus bienes inmuebles y habían sido posteriormente despojado volverían a recuperarlos<sup>2079</sup>. La inestabilidad política y social se fue acrecentando, habiéndose desbordado la situación, por lo que el Conde de Toreno presentaría la dimisión el 13 de septiembre de 1835, dando paso en su gabinete a Mendizábal. Con estas medidas se suprimieron 892 de los 1940 conventos que había en España en este periodo.

<sup>2077</sup> BELLO, J., 1997, p.85.

<sup>2078</sup> GARCIA LOPEZ, Genaro Luís, 2004, p.67.

<sup>2079</sup> FRAGA IRIBARNE, M<sup>a</sup> Luisa, 1993, P.43.



	Ordenamiento desamortizador	Medidas primordiales	Incidencia en el Patrimonio Monumental
Martínez de la Rosa			
Conde de Toreno	4 de julio de 1835, supresión de la Compañía de Jesús	Nacionalización de los bienes con objeto de extinguir la deuda	Se exceptúan la venta de los bienes eclesiásticos (art.5)
	25 de julio de 1835	Nacionalización de los bienes, exceptuando las casas de clérigos regulares de las Escuelas Pías y los colegios de los misioneros para la provincia de Asia	
	Real Orden del 29 de julio de 1835		Medidas protectoras del Patrimonio Monumental Conventual: Nacen las Comisiones Provinciales
	11 de agosto de 1835.	Se crean las oficinas de amortización de los bienes, rentas, muebles e inmuebles, créditos, dinero, frutos y demás pertenencias de los monasterios y conventos que habían sido suprimidos por el R.D. de 25 de julio.	En principio colaboraran con las Comisiones

### 2.3.3. El modelo administrativo en el primer periodo del ministro Mendizábal (14 de septiembre de 1835-15 de mayo de 1836).

Es en el periodo de gobierno del ministro Mendizábal, que ocuparía el Ministerio desde el 14 de septiembre de 1835 hasta el 15 de mayo de 1836, que supondría un ataque sin precedente a las órdenes religiosas<sup>2080</sup>. A los pocos días

<sup>2080</sup> Sobre el periodo desamortizador que va a significar el bienio 1836-1837 sobre los bienes eclesiásticos, especialmente con la figura de Mendizábal cabe recoger algunos fragmentos a modo de síntesis de la obra de Francisco Tomás y Valiente: *Las características de la legislación desamortizadora de Mendizábal pueden sintetizarse así: conexión entre desamortización, reforma eclesiástica y amortización de la deuda pública interior; y pretendida defensa del trono de Isabel II a través del mismo proceso desamortizador, procurando crear partidarios liberales entre los interesados en la consolidación de las ventas de bienes desamortizados. La importancia de la desamortización eclesiástica fue, en este periodo, probablemente mayor que en cualquier otro. Por eso, y por ir dicha política unida a la reforma del clero regular, Mendizábal ha pasado a la historia como el símbolo del poder anticlerical y del gobernante liberal y desamortizador. Mendizábal no aportó de original más*

que Mendizábal se va a incorporar al Ministerio se publicaría **el Real decreto de 11 de octubre de 1835**, que ampliaría el contenido del de julio. En el preámbulo ya se incluyen las causas de la supresión de las órdenes mendicantes, muy en la línea de la ideología liberal que se había mantenido desde el constitucionalismo gaditano, apelándose nuevamente a la utilidad pública de claro carácter economicista, *cuán grande es el perjuicio que al reino se le sigue de la amortización de las fincas que poseen, y cuanta la conveniencia pública de poner está en circulación para aumentar los recursos del Estado, y abrir nuevas fuentes de riqueza*, y apelando a una utilidad de signo espiritualista al considerar que muchos de estos conventos *cuán inútiles ó innecesarias son la mayor parte de ella para la asistencia espiritual de los fieles*. En el artículo 1º se dispondría la supresión de todos los monasterios de órdenes monacales, la de los canónigos regulares de San Benito; los de San Agustín y los premonstratenses, sea cual fuese el número de monjes o religiosos que compusiera la comunidad, exceptuando algunos monasterios que por su tradición religiosa e histórica consideraron que debía permanecer abierta como fueron los casos de *los monasterios de la orden de S. Benito el de Monserrate en Cataluña, S. Juan de la Peña y S. Benito de Valladolid; de la S. Gerónimo el del Escorial y Guadalupe; de la de S. Bernardo el de Poulet; de la de cartujos el del Paular; de la de S. Basilio la casa que tiene en Sevilla*, aunque con la prohibición de que *pero con absoluta prohibición de dar hábitos y admitir á profesión los novicios que ahora hubiere, y con calidad de que los bienes raíces y rentas de esos monasterios queden también aplicadas al crédito público como los de las casas suprimidas*. Curiosamente los monjes de los conventos suprimidos se podían llevar los muebles de su uso particular, aunque cabe aclarar que no eran de su propiedad, ya que ésta lo tendría la institución religiosa a la que pertenecía (art.3). Se intentaría proteger el uso de los inmuebles de los conventos suprimidos, disponiéndose *hallaren cerrados en la actualidad por cualquier causa que sea, permanecerán en el mismo estado hasta que con la debida concurrencia de las Cortes se acuerde lo que más convenga* (art.6). Al mismo tiempo se establecería que *las respectivas secretarías del Estado y del Despacho se comunicarán inmediatamente las órdenes é instrucciones oportunas para la más pronta, puntual y ordenada ejecución de este mi Real decreto, y para que se recojan y pongan á buen recaudo los efectos de los monasterios, colegios y conventos suprimidos* (art.9).

Sin embargo, entre julio de 1835 y marzo de 1836 existiría una doble realidad: por un lado, existía una legislación de supresión de conventos, cuya afectación se limitaba a determinados conventos y órdenes; y por otro lado, nos encontrábamos con el hecho de que en las provincias se había instalado las juntas revolucionarias, que se habían apoderados de los bienes de prácticamente todos los conventos, por lo que se había implantado una medida

---

*que la ampliación del ámbito de la desamortización eclesiástica, que ahora abarcará por primera vez a los bienes del clero secular. Fue más radical que los liberales del trienio, pero en contra de lo que suele atribuírsele, su plan de la amortización de la deuda y de enajenación de tierras careció de originalidad, pues, venía ya proponiéndose y en parte aplicándose, desde los tiempos de Godoy (...) TOMAS Y VALIENTE, Fr., 1997, p.585.*

legal diferente al defendido desde las instancias gubernamentales. Esta situación había llevado por consiguiente a una desigualdad entre aquellas provincias que habían ejecutado las leyes del Gobierno Liberal y las que habían desamortizados por su cuenta. Algunas provincias como Madrid, al no constituirse una Junta Revolucionaria, la desamortización había sido llevada siguiendo las medidas que había establecido el Gobierno, por lo que todavía en este momento había permanecido abierto algunos conventos y monasterios, por lo que el gobernador civil, Olózaga, envió el 12 de enero al Gobierno la autorización para que pudieran ser suspendidos todos, con la excepción de los escolapios, argumentando que a raíz de los sucesos ocurridos en Barcelona, podía extenderse a la capital del Reino, por lo que era mejor que se cerrara cuanto antes. El 13 de enero, un día después de la petición, se acordó, que *conforme a la petición del Consejo de Ministros, cerrasen todos los conventos de esta Corte.*

Para llevar a cabo esta operación inmobiliaria, se erigió en cada provincia una Junta de enajenación de edificios y efectos de los conventos suprimidos, junto a una Junta Superior de Enajenación en Madrid. En las operaciones de enajenación inmobiliaria que se van a producir entre 1836 y 1839, se fue definiendo un interés general sobre los intereses particulares de las distintas órdenes religiosas, considerándose que estos bienes tenían que entrar a formar parte de la libre circulación de mercancías, por los que en la mayoría de los casos fueron utilizados como meros bienes patrimoniales, perdiendo su uso religioso, exceptuando los templos, aunque no siempre. La adquisición por parte de un particular del bien inmueble por consiguiente se convierte en una operación común durante este momento, por lo que adquiriría un derecho de disposición y gozo sobre el mismo, que en principio no tendría límite por el Estado, por lo que el inmueble conventual podía ser sometido a una operación de transformación estructural y funcional, e incluso su derribo, por lo que pondría en cuestión el espíritu de interés público que había precedido la promulgación de los decretos desamortizadores. El mismo Estado se iría a comportar mediante la propia Junta de Enajenación como un adquirente más de bienes inmuebles, que en muchas ocasiones derribaría un gran número de claustros y huertas sin ningún tipo de conciencia patrimonial que considera estos bienes como parte del Legado Patrimonial.

#### **2.3.3.1. Las Juntas de intervención de objetos de ciencia y arte.**

Como apuntan las historiadoras del arte Amelia López Yarto e Isabel Mateo *La primera palabra que surge ante los acontecimientos es caos, creado por la falta de entendimiento entre el Ministerio de Gobernación y los gobernadores civiles provinciales, en los que se había delegado, en un principio, la labor de recogida de los objetos científicos y artísticos de los conventos afectados.* Los gobernadores civiles se ven desbordados por la falta

de personal y criterio artístico, solicitando la creación de una comisión de control de objetos de arte. Estas comisiones se encargarían de controlar los desmanes que se estaban produciendo desde la fecha inmediata de la promulgación de la ley. Al mismo tiempo se le van a encargar que redactasen a raíz de la Orden de agosto de 1835 unos inventarios de los bienes artísticos que consideraran dignos de ser conservados. No fue fácil esta labor, ya que la mayoría de los casos, no eran personas adecuadas por su formación, a lo que se unía el gran número de bienes artísticos que había que catalogar por lo que se producía un verdadero desbordamiento. Ante estas dificultades, la Academia de San Fernando nombraría en Junta Ordinaria del 31 de agosto de 1835 a don Miguel de Inclán como responsable de arquitectura, a don Juan Gálvez de la pintura, y a don Francisco Elías de la escultura. En carta con fecha de 5 de octubre de 1835, la Academia se va a dirigir al Secretario del Despacho de Interior, aconsejando la necesidad de hacer inventarios artísticos por personas idóneas, y además porque las piezas se están vendiendo a extranjeros. Incluso se precisa que en Sevilla se están vendiendo pinturas de Zurbarán entre otros pintores, procedentes de los conventos expropiados<sup>2081</sup>. En Sevilla comenzaría a funcionar la llamada Junta de Museo, siendo designado en septiembre de 1835 sus miembros por el gobernador civil de la provincia, José Muso y Valiente, entre los que se encontraban el escultor Juan de Astorga, director de la Escuela de Nobles Artes; los pintores Andrés Rosi, José Bécquer, Salvador Gutiérrez y Antonio Quesada, el arquitecto Manuel Zayas. Al mismo tiempo el propio Gobernador Civil solicitó a la Corona la creación de un museo local, siendo aprobada la propuesta por la Real orden de 16 de septiembre de este mismo año, siendo Manuel López Cepero el miembro más influyente de la nueva directiva<sup>2082</sup>.

Sin embargo, al mismo tiempo que se exclaustaba un amplio número de conventos se comenzaría a delinear una institucionalización sobre el destino de los bienes exclaustro como fue el caso del **Real Decreto sobre el destino de los edificios de las comunidades religiosas de 25 de Enero de 1836**, disponiendo que *todos los edificios que en esta capital fueron monasterios y conventos, y ahora se hallan a cargo de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización, y también los que en adelante estuvieren en el mismo caso, se pondrán a disposición de una junta compuesta del gobernador civil de esta provincia, del corregidor de esta corte y de tres individuos que nombraré en representación de los acreedores del Estado*. Dicha Junta propondría el destino de cada uno de estos bienes inmuebles *según su capacidad y situación, así como las obras de reforma, demolición y construcción que sean necesarios para llegar a tener, por los que se podrían convertir en 1º Cuarteles*

<sup>2081</sup> LOPEZ-YARTO, Amelia; MATEO GOMEZ, Isabel Gestión del Catálogo del Museo Nacional de pintura en el siglo XIX, VII *Jornada de Arte, Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*, Madrid, 22-25 de noviembre de 1994. Actas Madrid, 1995, pp.273-277.

<sup>2082</sup> LOPEZ RODRIGUEZ, José Ramón *Historia de los museos de Andalucía 1500-2000*. Universidad de Sevilla, Sevilla, 2010, pp.164-165,

*cómodos y ventilados en que puedan alojarse una guarnición de 100 hombres de infantería y 20 de caballería; 2º. Hospitales y cárceles; 3º. Nuevas calles y ensanches de las actuales; 4º. Plazas y mercados de nueva planta e incluso la misma junta meditará y propondrá también cuales de las propiedades que resulten sin aplicación puedan enajenarse a particulares. Incluso la Junta quedaba facultada, previa la indicada aprobación, para hacer subastas, ventas, contratos, transacciones y cuanto convenga al bien del Estado y del público, y autorizado exclusivamente D. Joaquín Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, actual corregidor de esta Corte, para dirigir todas las obras de ornato y mejoras que han de refluir en beneficio del vecindario de esta capital.* El destino de los conventos desamortizados podría ser múltiple. Una medida muy usual fue la demolición, por considerarse que no era digno de conservarlo, al no designarle una nueva función, por lo que en el solar que había ocupado el antiguo convento se transformaba en una plaza pública donde se instalaría a su vez un mercado de abastecimiento público. Si se optaba por conservar el inmueble desamortizado, se transformaba su uso, bien convirtiéndolo en cuartel, en cárcel u hospital, o incluso podría ser adquirido por instituciones privadas. No cabe duda que los bienes inmuebles conventuales habían pasado a convertirse en bienes de dominio público, al dejar de ser bienes de propiedad especial, en este caso de interés religioso, para convertirse en bienes de utilidad pública cuyo destino rompía el uso para el que se había construido.

#### 2.3.3.2. Las Comisiones de Amortización.

Sin embargo, no solamente hubo intención de proteger a los conventos desamortizados de la Corte, sino que la medida se quiso extender a todas las provincias por lo que un día después, el 26 de enero de 1836 sería promulgado **la Real Orden comunicando al Sr. Secretario de Estado de la Gobernación del Reino sobre destino de los edificios que fueron monasterios y conventos** por lo que se instruía que *para que los edificios que fueran monasterios y conventos en esta Corte, se destinen desde luego al beneficio de los acreedores del Estado, comodidad y ornato de los pueblos. S. M. desea que esta medida sea extensiva á los demás del Reino, tanto para que se mejore el aspecto público, las cárceles, cuarteles y establecimientos de Beneficencia; como para que se dé trabajo al gran número de brazos que se encuentran hoy en la inacción por efecto de las circunstancias políticas.* Un **Real decreto de 15 de febrero de 1836** establecería en cada capital de provincia una comisión formada por el intendente, un vocal de la Diputación y un comisionado administrador de arbitrios de amortización (art.1). De este modo se prevenía al intendente de cada capital que una vez oído a la Diputación y demás autoridades, propusiera cual sería el uso de los conventos suprimidos, por lo que dio lugar a un amplio número de circulares de las Diputaciones a todos los Ayuntamientos de cada provincia con el fin de obtener información sobre el inmueble respectivo. Entre las funciones de las comisiones estarían las de tomar conocimiento de las fincas, derechos y

acciones de cualquier especie que hayan pasado a ser propiedad de la Nación, como procedentes de monasterios, conventos y otros establecimientos semejantes, ya suprimidos, o que se fueren suprimiendo, y asegurarse de que sus caudales, existencias y pertenencias han tenido, y continúan teniendo y 2º velar sobre que las mismas fincas y bienes, mientras subsistan al cuidado de la nación por no haberse procedido a su pública venta y consiguiente adjudicación, se arrienden, utilicen o se hagan productivos de tal modo que no reciban menoscabo, ni dejen de rendir lo que justamente deben esperarse de ellos.

El núcleo vital de la medida desamortizadora se daría con la promulgación del **Real Decreto de 19 de febrero de 1836**, que es cuando comienza a poner en marcha la desamortización eclesiástica<sup>2083</sup>. En el Preámbulo aparecerá recogido las verdaderas intenciones de la medida, en un plano doble, una primera que seguía las directrices de las medidas desamortizadoras anteriores, atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la Deuda Pública consolidada y la otra que representaba la nacionalización de los bienes para ponerlos en manos de los intereses privados, *al entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos ventajas (...)*. En su artículo 1 se declaraba la venta de todos los bienes de las Comunidades y Corporaciones Religiosas extinguidas, mediante el procedimiento de la subasta pública. Muy importante es su artículo segundo por el que debía quedar exento de *venta los edificios que el Gobierno destine para el servicio público, o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales*, para lo que el Gobierno tendrá como *función publicar la lista de los edificios que con estos objetos deben quedar excluidos de la venta pública*, completándose con la Instrucción del 1 de marzo para llevar a efecto la enajenación. Como apunta José Ramón López a partir de la publicación de este Decreto, comenzarían a ejecutarse las subastas, apareciendo publicados en los diversos Boletines Oficiales y en el Boletín Oficial de la Venta de Bienes Nacionales, editado en Madrid. En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 534 de 26 de febrero de 1836 sacaría en subasta los bienes de carpintería, cuadra y tahona de la Cartuja. Con el **Real Decreto de 8 de marzo de 1836** se llegaría a la culminación del proceso desamortizador, generalizándose las medidas a todas las órdenes y congregaciones, *incluidas la de los clérigos regulares y la de los cuatros órdenes militares y San Juan de Jerusalén (art.1), así como los beaterios (art.4)*, permitiendo solamente el establecimiento de una Casa de Venerables por diócesis *para los exclaustros que voluntariamente soliciten ser admitidos en ella (art.17)*. Una serie de medidas protectoras del Patrimonio Monumental se unirían a las medidas desamortizadoras, como aparece reflejada en el artículo 20 al disponer que se exceptuaría de los bienes que se

<sup>2083</sup> DE NIEVA, J.M. *Decretos de la reina doña Isabel II dados en su Real nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, Madrid, 1836, XXI, 77.83.



aplicarían a la Caja de Amortización, los muebles de las casas de religiosos que continuasen abiertas, a lo que se uniría el artículo 23, que autorizaba a los Ordinarios, con la previa aprobación del Gobierno, *disponer a favor de las parroquias pobres de su Diócesis de los vasos sagrados, ornamentos y demás objetos pertenecientes al culto, exceptuando aquellos que por su rareza o mérito artístico convengan conservar cuidadosamente y por lo que por su considerable valor no correspondieran a la pobreza de las Iglesias*. Por su parte, los bienes inmuebles conventuales desamortizados precisaba en su artículo 24 *que podrán destinarse para establecimientos de utilidad pública los conventos suprimidos que se crean a propósito, por lo que se abría la posibilidad de que los conventos sirviesen de local para las bibliotecas u otras instituciones culturales y educativas, completándose con el 25 por el que aplicarán los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecientes a los institutos de ciencias y artes, á las Bibliotecas provinciales, Museos, Academias y demás establecimientos de instrucción pública*, medida que volvería repetirse en el artículo 25 del real decreto de 29 de julio de 1837.

Por su parte, el Real Decreto de la Reina María Cristina de Borbón, dado en el Pardo a **19 de febrero de 1836**, contemplaba en declarar en venta desde aquel momento todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, exceptuándose de esta medida general los edificios que el gobierno destinase para el servicio público, para conservar monumentos de las artes o para honrar la memoria de las hazañas nacionales. Se decide traer a su vez a la Corte los bienes artísticos considerados más importantes para su salvaguardia, con la idea de formar un Museo Nacional. Para ello se escoge un edificio, la iglesia de San Francisco, el Grande, pero queda desechado debido a que las Cortes deciden dedicarlo a Panteón de los Hijos Ilustres. El 22 de junio de 1836 se decide instalarlos en el antiguo convento de la Trinidad, naciendo un Museo Nacional cuyos bienes se han convertido en patrimonio público del Estado. El 24 de julio de 1838 se inauguraría el museo, aunque su primera vida sería corta ya que se cerraría poco tiempo después por falta de una asignación económica acorde al mantenimiento de los cuadros.

#### **2.3.3.3. Los Museos de Bellas Artes provinciales. El Museo provincial de Sevilla y Cádiz.**

Las medidas desamortizadoras que se van a desarrollar durante el periodo de las Regencias van a culminar prácticamente un proceso que había comenzado en las etapas anteriores: la descontextualización de los bienes conventuales, especialmente por el destino al que van a tener una vez superado el despojo patrimonial que supuso en la mayoría de los casos los mercados fraudulentos o incluso las subastas públicas. A pesar de que en las

disposiciones normativas un gran número de bienes muebles históricos-artísticos se exceptuaría de las medidas desamortizadoras, lo cierto es que comenzaron a llenar los espacios públicos del saber y de la exaltación nacional que se convirtieron los nuevos museos de Bellas Artes, bien a nivel nacional, bien a nivel provincial, en base a los depósitos de las obras exclaustadas. La desamortización ha provocado por consiguiente la posibilidad de depositar unos bienes muebles que hasta este momento habían tenido un destino distinto, ser bienes de interés espiritual. Como apunta José Ramón López Rodríguez, la desamortización significa en España por tanto el comienzo del coleccionismo público, lo cual trae las siguientes consecuencias: 1º) *El coleccionismo público se centra fundamentalmente en museos de pintura. Se ha invertido la situación de siglos anteriores en los que las antigüedades y las ciencias de la naturaleza eran predominantes en los museos;* 2º) *No es un coleccionismo pretendido, buscado, que tenga una dirección. Lo cual quiere decir que los museos que se forman son museos de alivio, con unas colecciones que dejan muchos que desear (...)* 3º) *Se crean estos museos como medida de protección del patrimonio. Pero el Estado no tiene ninguna vocación de coleccionismo (...)* Una vez instalados los cuadros en el edificio correspondiente parece que no queda nada más por hacer 4º) *Al Estado le han salido gratis las colecciones. Pretenderá que le salga también gratis los museos (...)*<sup>2084</sup>.

Al igual que en Madrid y en otras ciudades de provincias, en Sevilla, en este caso a propuesta del gobernador civil, D. José Musso y Valiente, decretaría la creación de un Museo para acoger los bienes artísticos expoliados el día 16 de septiembre de 1835. En las páginas de *El Artista* saldría unas notas sin firmas elogiando la actitud del gobernador civil sevillano *Si á alguna de las principales autoridades de Sevilla le hubiese ocurrido hace muchos años el pensamiento feliz que acaba de proponer al gobierno de S.M. D. José Musso y Valiente, gobernador civil de aquella provincia, ¡Cuán rico en preciosos cuadros antiguos serían actualmente aquel suelo privilegiado de nuestra España! Difícil es en efecto recordar, sin que suban á la frente los colores de la vergüenza y de la indignación, que por causas que no es del caso actualmente engalanandos con cuadros españoles, con cuadros que nunca debieron de salir de España, sus museos y galerías una multitud de príncipes y generales extranjeros. Y no hablemos solo de los cuadros: ¡Quien podría enumerar los muchos manuscritos antiguos, códices y preciosidades artísticas de toda especie, que ha hecho pasar de nuestros antiguos alcázares y catedrales a manos de los especuladores y anticuarios extranjeros (...)* Pero no basta que todos lamentemos estos males: es menester que unos propongan los medios de remediarlos y que otros más poderosos, los pongan en práctica: esto último, nadie se halla mas en estado de hacerlo que los gobernadores civiles; y ¡Ojalá sigan todos el hermoso egemplo que acaba de darles en la provincia de Sevilla el Sr. D. José Musso y Valiente! Este benemérito funcionario público, tan conocido por sus vastos conocimientos en literatura cuanto por su ilustrado amor a las artes, acabar de

<sup>2084</sup> LOPEZ RODRIGUEZ, José Ramón “El desarrollo de los museos arqueológicos en Andalucía durante el siglo XIX” en DEAMOS, María Belén; BELTRAN FORTES, José (Editores), *Arqueología fin de siglo. La arqueología española de la segunda mitad del siglo XIX. I Reunión Andaluza de Historiografía Arqueologica*, Spal Monografías, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2002, p.159.

*proponer al gobierno la más saludable medida para cortar de una vez añejos abusos, y no comprendemos en verdad como se ha dilatado hasta el día la ejecución de tan excelente proyecto. Propone el Sr. Musso que se forme en Sevilla un museo, donde se reunirá todas las riquezas artísticas que hasta ahora andan diseminadas en los conventos, cartujas, ya sean comprándose a sus actuales propietarios que consientan en venderlas, ya echando mano el gobierno de todos los objetos de esta clase que en aquella provincia le pertenecen (...)*<sup>2085</sup>. Se conserva el acta de constitución de la Junta de Museos, con fecha de 1835, donde se aprobaba la propuesta del Sr. Muso para la creación de un museo en la ciudad hispalense, siguiendo la directiva de una Real Orden de 16 de septiembre de 1835. La primera junta directiva estaría compuesto por tres personalidades digna de mencionar en el ámbito cultural sevillano: Francisco Pereira, canónigo de la catedral y consiliario de la Real Escuela de Nobles Artes; Manuel López Cepero, que había sido nombrado el año anterior canónigo de la catedral de Sevilla, y José Huet, que perteneció al Senado durante los años 1834 a 1837. La primera reunión se celebró en las casas de D. Francisco Pereira, acordándose como sede el convento de San Pablo, pero al encontrarse una serie de obstáculos se decantarían posteriormente por el edificio del Hospital del Espíritu Santo, teniéndose las primeras reuniones, aunque ocasionalmente el Director del Colegio de San Telmo también se brindaría a ceder dicho edificio para instalar las obras<sup>2086</sup>.

El año 1836 fue crítico para la salvaguardia del patrimonio histórico, debido a la tensión bélica que se estaba viviendo entre carlistas e isabelinos, más aun por la proximidad del ejército carlista comandado por el general Miguel Sancho Gómez, motivo por el que se establecieron una serie de medidas proteccionistas que afectaron a un gran número de obras de artes, recién expropiadas por la desamortización. Entre ellas, cabe mencionar el traslado de algunas pinturas, como fue el caso del *Santo Tomás de Aquino* de Zurbarán a la Catedral por el canónigo López Cepero. Por fin, en 1836 sería destinado definitivamente el antiguo convento de la Merced como la sede institucional del Museo de Bellas Artes<sup>2087</sup>. En este periodo se nombrarían a dos comisiones que se encargarían de los bienes pertenecientes al Museo existentes en el Convento de Santo Domingo de Porta Coeli, San Benito y Montesión. Por fin, la Junta de Museos decide en sesión de 15 de enero de 1838 encargar a D. José María Amor la solicitud a la Junta de Enajenación de Conventos Suprimidos de la Provincia, el exconvento de la Merced. En octubre de 1839 ya había sido aceptada la propuesta y fue nombrado como primer

---

<sup>2085</sup> El texto pertenece a un artículo anónimo publicado en *El Artista* con el título *Museos Provinciales* defendiendo la idea de fundar en cada provincia un Museo que recogiera los bienes artísticos expropiados tras las medidas desamortizadoras (Cf. *Museos Provinciales* en *El Artista*, II, Madrid, 1835-1836, pp.92-93).

<sup>2086</sup> LORENZO MORILLA, Juan "La creación del Museo Arqueológico de Sevilla" *Atrio*, 4, Sevilla, 1992, pp.139-140.

<sup>2087</sup> VEGA TORO, Mercedes "El Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta la creación de su primer reglamento" *Mus-A revista de los Museos de Andalucía*, n.º.3, 2004, pp.56-64.

director del museo a Antonio Cabral Bejarano y posteriormente el 16 de diciembre del mismo año se autorizaba el primer reglamento para el régimen y gobierno del museo de la provincia de Sevilla. Estaría formado por una introducción, cincuenta y dos artículos y el primer presupuesto del museo. Se conserva el documento de la primera Asamblea Extraordinaria, que estarían compuesto por el presidente de la Junta de Museos, diputado provincial José María Amor; los vocales nombrados por el jefe político, Manuel López Cepero; el marqués del Arco Hermoso, José María Cabello; Antonio Cabral Bejarano y Antonio M<sup>a</sup> Esquivel, ambos insignes pintores y miembros destacado del Liceo, ejerciendo como secretario a José María del Río. En esta Asamblea ya el presidente José M<sup>a</sup> Amor, expondría un alegato sobre la conservación y la tutela de las obras de arte, y la finalidad de configurar un museo: (...) *de cuanto indican estas reflexiones la Junta trabaja esmeradamente para poseer con exclusión de toda otra corporación el convento de la Merced, y espera de las ilustradas asociaciones que lo ocupan... que es observancia de sus estatutos particulares, de su ilustración y de su amor al bien público, depondrán quejas vagas, rectificarán el juicio equivocado de ciertos hechos, y no darán motivo, sosteniendo injustas pretensiones, a que se aflija e incomode más a las autoridades constituidas.*

Al mismo tiempo se referirá al hecho de las dificultades que han tenido a la hora de encontrar sede para albergar la colección pictórica y el poco respaldo administrativo que han encontrado: *A no contar con un brazo fuerte ni con la segura protección de la autoridad que deshacer los infinitos inconvenientes que se le han opuesto (...) por la delicada situación política por la qua atraviesa la región (...) los establecimientos públicos de la clase de los del Museo no dejan ver sus ventajas sino después de mucho tiempo transcurridos adolecen de otro mal mayor (...) últimamente la falta de ilustración es otro inconveniente que lucha constantemente con los establecimientos científicos y no cede sino cuando el mismo establecimiento ha creado tantos amigos como antes tenía enemigos.* La falta de presupuesto será otro de los males a combatir para la existencia de un Museo de Bellas Artes: *Si los presupuestos que acompañamos para que se cumpla este reglamento parecen mezquinos es que aún faltan ciertas cantidades como para restaurar cuadros, marcos, que esperan aumentar una vez superadas las circunstancias políticas adversas.*

Como apunta Mercedes Vega *con la aprobación de los reglamentos, se pretende dar transparencia a las actuaciones de la Junta de Museos y evitar de esta manera cualquier tipo de especulación*, en uno años que se había puesto en tela de juicio la práctica de algunos de los miembros de la Junta, al realizarse la compraventa de múltiples obras de arte de manera aparentemente ilegal, como sería el caso de la adquisición que haría el barón Taylor, un personaje influyente de la Corte de Luis Felipe, que mantuvo durante estas fechas una fluida correspondencia con el canónigo y miembro principal de la Comisión de Museos, Manuel López Cepero, a lo que se uniría la falta de localización de muchas obras que desde la desamortización no se conocían su paradero, las precarias condiciones de traslados de las obras de arte afectaban

mucho a su conservación, por lo que se perdían algunas de ellas e incluso había poca seguridad que provocaba los continuos hurtos y robos de muchas piezas. De ahí que se abordara la necesidad de confeccionar un primer inventario general, que se lo encargaría primeramente a Antonio Cabral Bejarano, que supuso un ensayo frustrado, por lo que en este momento se acordó uno nuevo, más exhaustivo y pormenorizado.

En Cádiz se formó el museo con los restos del monumental retablo pintado por Zurbarán para la Cartuja de Jerez de la Frontera. Fueron recogidas por Antonio Fronteras, pintor de retrato y miliciano nacional en 1835, que había sido nombrado por el gobernador de Cádiz, Pedro Urquinaona, como encargado de recoger los bienes desamortizados en la provincia gaditana, notificándolo a su vez al Ministro del Interior, Martín de los Heros. Se hicieron una selección de pinturas, según el mérito artístico que los peritos consideraron, por lo que se quedarían con las de primera categoría, mientras que los de segunda se destinó a venderlas en pública subasta. Sin embargo, en este caso, la Academia de San Fernando al enterarse de la medida pudo suspender la subasta, aunque como señala Gaya Nuño los intereses económicos terminaron por imperar por lo que a finales de 1836, Urquinaona informaría que la venta de los cuadros habían sido vendidos a 22 reales cada uno, habiéndose conseguido un importe total de 20.000 reales. Al mismo tiempo el pintor Mesas lograría la autorización de la Reina Gobernadora con la Orden del 9 de junio de 1836 para vender seis zurbaranes de los guardados en el Museo de Cádiz, que aunque nuevamente contó con la oposición de la Academia de Bellas Artes, no se pudo hacer nada porque el día 20 de junio ya había sido vendidos. La operación se había realizado a nombre de José Cuesta de Sevilla, testaferro de Taylor, ya que esa misma noche saldrían los cuadros en un barco con destino a Francia. La venta de los cuadros llegaría a las mismas Cortes españolas, donde protestaría el diputado gaditano Vadillo, e incluso Mendizábal, e incluso el Ministro del Interior, Acuña, intentó dar una respuesta, aunque achacó la medida a que en este momento no desempeñaba dicho cargo, sino su antecesor Pío Pita Pizarro<sup>2088</sup>.

	Ordenamiento desamortizador	Medidas primordiales	Incidencia en el Patrimonio Monumental
Mendizábal	Real Decreto de 11-10-1835	Se reanuda la confiscación de bienes conventuales.	Disposiciones de tutela del Patrimonio Monumental.
	Real Decreto sobre el destino de los edificios de	Se crean las Juntas de Bienes Inmuebles	Transformación de los conventos en bienes de

<sup>2088</sup> GAYA NUÑO, Juan Antonio, 1958, pp.22-23; TORMO, Elías, "El despojo de los Zurbaranes de Cádiz, el viaje de Taylor y la efímera Galería Española del Louvre" *Cultura Española*, 1909, pp.25-39.

	las comunidades religiosas de 25 de Enero de 1836		utilidad pública.
	Real Orden del 26 de enero de 1836 comunicando al Sr. Secretario de Estado de la Gobernación del Reino sobre destino de los edificios que fueron monasterios y conventos.		
	Real Decreto de 19 de febrero de 1836	Desamortización de los bienes eclesiásticos.	Exento de ventas los bienes inmuebles conventuales que tuviesen interés histórico y artístico.
	Instrucción para llevar a efecto la enajenación de 1 de marzo		

#### **2.3.4. Un nuevo modelo administrativo en la segunda etapa del Gobierno de Mendizábal (agosto de 1836-julio de 1837).**

Durante las Cortes Constituyentes de 1836-1837, de carácter progresista se va dar las medidas más radicales en el ámbito de la desamortización eclesiástica. Revuelta recoge las discusiones parlamentarias a propósito del destino de los inmuebles que habían sido ocupados, ya que algunos como García Blanco, defendería que se destinasen a edificios de utilidad pública, otros como Ferrer, que se enajenasen a particulares e incluso existirían posturas defendiendo el derribo de los conventos, como apuntara Sancho. Se desarrollaría desde el triunfo de la revolución en agosto de 1836, hasta el final de la guerra carlista, que constituiría la culminación de todo el proceso legislativo anterior.

##### **2.3.4.1. Las Juntas que ha de entender en la enajenación de los edificios de conventos, y sus muebles y efectos: Real decreto de 13 de septiembre de 1836.**

Todos los monasterios y conventos quedaron tras la exclaustración a cargo de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización. En el ámbito de las provincias, fueron los intendentes los responsables de la ejecución de los planes de demolición o reestructuración de los conventos desamortizados. Para ello elaboraban un Informe sobre los inmuebles existentes en su demarcación, indicándose cuales era su estilo arquitectónico, el mérito artístico, y el destino más oportuno que podía tener el edificio, aunque en este último punto también tenían que aportar su punto de vista las autoridades provinciales, como el Gobernador Civil, Diputación Provincial, Ayuntamiento y la autoridad militar. El Ministerio de Hacienda tras examinar el informe sería el que daba el dictamen final. Los conflictos entre la Administración Central y las autoridades provinciales fueron continuos a la



hora de concebir un nuevo uso para el convento desamortizado, ya que las corporaciones locales querían destinar el inmueble a un nuevo uso público, mientras que la Amortización veía con ello una pérdida económica considerable al no subastarlo. Las corporaciones municipales tenían que elaborar un Informe donde constara que el edificio solicitado fuese a propósito para el fin pedido; que no estuviese designado para la venta ni prometiese ventajas económicas su demolición y la conformidad de la corporación o persona que lo solicitase con pagar el canon correspondiente. La decisión final estaba siempre en manos del Ministerio de Hacienda, después que las Juntas Provinciales remitieran el informe correspondiente de la corporación municipal a la Junta Central, y ésta la enviara al Ministerio.

La venta de los conventos va a uno de los destinos más usuales de las medidas desamortizadoras, cuyo procedimiento se determinaría por el **Real Decreto de 30 de agosto de 1836**, que en su artículo 1º dispondría que entraran en el Tesoro de la nación todos los tesoros de los productos que puedan obtenerse por las ventas de los edificios que se componían los monasterios y conventos de las comunidades religiosas de ambos sexos suprimidos por el Real Decreto de 8 de marzo, exceptuándose aquellas iglesias abiertas al culto público y los edificios conventuales que se utilizaran para otros fines públicos. Se estableció todo un procedimiento administrativo con la promulgación del **Real decreto de 13 de septiembre de 1836** arreglando las Juntas que han de entender en la enagenación de los edificios de conventos, y sus muebles y efectos. En la Exposición de Motivos ya aparecería indicada algunas de estas circunstancias negativas a la hora de la protección de algunos inmuebles: *vendrían á ser estériles e insuficientes si la enagenacion de los edificios que sirvieron de monasterios y conventos de las comunidades religiosas suprimidas y de sus muebles, efectos y alhajas no se verificase con la celeridad que exigen las circunstancias; y como por consecuencia de las mismas se hace indispensable, no solo variar las reglas establecidas en mi Real decreto de 25 de enero del corriente año, sino generalizar la medida á todo el reino, y remediar también los abusos que hayan podido introducirse.* Entre sus medidas se encontrarían la supresión de las Juntas creadas el 25 de enero (art.1), por lo que se establecería en su lugar en todas las provincias civiles del Reino una Junta(art.2), habiendo una Junta Superior en la capital, *quetendrá una organización especial, y se entenderá directamente con mi Gobierno* (art.3), por lo que las *Juntas de provincia se entenderán con la superior, ejecutando las disposiciones y órdenes que les comunique* (art.4). La Junta Suprema de Madrid informaría al Gobierno, especialmente al Ministerio de Hacienda, de todas las medidas que se pudieran adoptar. Las Juntas estarían formadas por el Intendente como Presidente, dos vocales de la Diputación Provincial, los agregados de la Junta de Defensa, un procurador síndico del Ayuntamiento y el contador de Arbitrio. Se completó el Decreto con la **Instrucción de 1 de septiembre de 1837**, en la que las Juntas serían las encargadas de anunciar públicamente la nómina de conventos puestos en

ventas en el territorio demarcado, por lo que una vez presentado cualquier petición de compra, se tasaba, que lo realizaría dos arquitectos, uno nombrado por la junta y otro por el supuesto comprador, que caso de que no se pusiesen de acuerdo, se nombraría un tercero. Una vez tasado el edificio, se anunciaba la subasta durante treinta días y ya en el último se haría el remate a favor del mejor postor. Una vez realizado la subasta, se enviaba el expediente a la Junta Superior para que el Gobierno autorizase la venta del inmueble. En el artículo 5º se precisaba la modalidad del pago, que podía ser en metálico o incluso en letras del Tesoro, pudiendo incluso abonarlo en cuatro plazos. Si algún jefe político utilizase el convento exclaustro sin autorización tendría que pagar el importe correspondiente, como así se establecería en la **Real Orden de 21 de noviembre de 1836**. Los conflictos entre la Administración Central y las autoridades provinciales fueron continuos a la hora de concebir un nuevo uso para el convento desamortizado, ya que las corporaciones locales querían destinar el inmueble a un nuevo uso público, mientras que la Amortización veía con ello una pérdida económica considerable al no subastarlo. Las corporaciones municipales tenían que elaborar un Informe donde constara que el edificio solicitado fuese a propósito para el fin pedido; que no estuviese designado para la venta ni prometiese ventajas económicas su demolición y la conformidad de la corporación o persona que lo solicitase con pagar el canon correspondiente. La decisión final estaba siempre en manos del Ministerio de Hacienda, después que las Juntas Provinciales remitieran el informe correspondiente de la corporación municipal a la Junta Central, y ésta la enviara al Ministerio.

**2.3.4.2. La intervención de la Real Academia de San Fernando en la tutela del patrimonio conventual expoliado de interés histórico y artístico: Las comisiones culturales y artísticas de la Real Academia de San Fernando y la fundación del Museo de la Trinidad, germen del museo público español.**

La Academia de San Fernando se unió a las voces de protestas de la pérdida del patrimonio histórico-artístico. Es conocido los Informes que presentaría la Real Academia para evitar la demolición de los edificios conventuales madrileños considerados de gran valor arquitectónicos a las Cortes, como los del **27 de febrero y el 6 de noviembre de 1836**, donde se exaltaría los valores artísticos e históricos que encerraba el Patrimonio Conventual: *La Academia, dados estos pasos, parecía haber ya llenado los deberes de su instituto, que es la conservación de los monumentos de las Artes, y de cuanto pueda conducir a su perfección y a su gloria; pero no pudiendo ver la demolición sin dolor que amenaza a los mejores edificios de la Corte a pesar de todas sus reclamaciones; la ninguna utilidad que esto puede producir; las consecuencias de tales medidas dentro y fuera de la nación, y que con veloz y rápido impulso se hunden en la nada los prodigios artísticos que tantos tesoros costaron y tanto honor hacen a sus autores y a la Arquitectura, precisamente cuando todos los pueblos conservan con el más minucioso cuidado los restos venerables de la antigüedad; juzgó por*

*unanimidad en la sección del 23 del próximo pasado mes que le faltaba dar un paso, el último acaso, que la pusiera a cubierto a los ojos de España y del mundo, y a los de la posteridad: el dirigirse a las Cortes para que como, tutoras de la Nación, como que a su cargo tienen los bienes nacionales, y el depósito de sus gloria y bienestar, puedan dictar sobre esto una medida legislativa, por si en manos del Gobierno y en sus facultades no estuviere ya tomarla(...).* Al mismo tiempo se dirige a las Cortes para que tutora de los bienes nacionales, dicten las medidas legislativas para la protección de los bienes históricos-artísticos. Al mismo tiempo se hacía hincapié en no dejar a los monumentos desolados, ya que muchos comenzaron a ser despojados de sus materiales, quemando sus maderas, arrancando las piedras de sus muros, por lo que confiaban en la próxima intervención del Gobierno. Sin embargo, a pesar del papel de la Academia de San Fernando, un gran número de conventos madrileños desaparecerían y los bienes muebles que en ella se contenían.

La Academia de San Fernando crearía unas comisiones culturales y artísticas que desempeñaría un papel determinante en la conservación del patrimonio monumental de los conventos. El 13 de enero de 1836 la Academia solicitó del Gobierno la autorización para mandar a las provincias comisionados de su confianza para que pudiesen conservarse los objetos de los conventos dignos de conservarse. La petición fue admitida por el Gobierno, promulgando la Real Orden de 20 de enero, expedida por el Ministerio de la Gobernación. En la junta del 7 de febrero se dirigirían una serie de disposiciones a los gobernadores civiles, para que pudieran paliar la destrucción patrimonial que se estaba produciendo a raíz de las enajenaciones clandestinas que se estaban produciendo. En la primera ya se plantearía la fundación de un Museo Nacional y las provinciales, por lo que se solicitaba que se evitara ninguna venta de pinturas aunque fuera de mala calidad la pieza (I). Además se solicitaba el nombramiento de profesores de pintura y escultura para la elaboración de un inventario (II), que se autorizasen a los profesores que pudieran entrar en los conventos y monasterios, y que informasen de todas las obras que tuviesen interés. El 20 de marzo las medidas serían sometidas a la aprobación del Gobierno y aparecía publicada la **Real Orden del 9 de abril de 1836** del Ministerio de Gobernación. Se le concedería a la Academia de Bellas Artes una intervención especial con respecto a los objetos artísticos de los conventos, estableciéndose una relación con los gobernadores civiles, que deberían de recoger información exacta de las pinturas (artículos 1º y 2º). En la Real Orden se haría una especial referencia a los conventos femeninos, que habían perdido un amplio número de bienes artísticos, para lo que se plantearía trasladarlos a un Museo Nacional en Madrid (art.4º)<sup>2089</sup>.

---

<sup>2089</sup> BELLO, J., 1997, pp.82-84.

El respaldo institucional llegaría con la **Circular de 14 de diciembre de 1836** de la Secretaría del Despacho de la Gobernación de la Península, para que los bienes artísticos fuesen colocados en museos: *en la que se exponía como eran muchas las riquezas artísticas que existían en los conventos y que convenían darles un destino más oportuno, bien para enriquecer el Museo Nacional, o bien para formar Museos Provinciales, donde estuvieran reunidas a la vista de todos para que sirvieran de modelos y contribuyeran a difundir el buen gusto y la afición a las bellas artes*, al mismo tiempo que la Academia de Bellas Artes de San Fernando sería confirmada su papel de institución consultiva previa: *hecho lo cual se consultará a la Academia para saber en qué puntos del Reyno convendrá reunirlos con el fin de formar los Museos provinciales*. Entre atribuciones encomendadas a la Real Academia sería la de supervisar a las personas que fuesen encargadas de recoger los cuadros de los suprimidos conventos y casas religiosas que una vez remitidas notas de los diferentes autores de que haya reunido obras al Ministerio de la Gobernación, serían examinadas por los académicos quienes harían la selección correspondiente, que en caso de su aceptación señalaría cuáles eran dichas obras, nombrando comisionados para elegir dos ejemplares que habrían de trasladarse *al expresado museo, siempre que por su mérito u otras circunstancias, merezcan formar parte de tan selecta galería*(1º). Por su parte, los jefes políticos debían manifestar el estado en que se hallaba el cumplimiento de la Real orden de 29 de julio del año, en la que se había dispuesto que las comisiones nombradas recogiesen e inventariasen los objetos artísticos y científicos existentes en los conventos suprimidos; y remitirán a este ministerio el inventario que se previene en el artículo 5º de dicha Real Orden, particularmente el relativo a obras de pinturas y esculturas, siendo consultada posteriormente a la academia *para saber en qué puntos del reino convendrá reunidos con el fin de formar los museos provinciales*(2º).

Las Comisiones no llegarían a funcionar en todas las provincias, solamente lo harían en Madrid, Burgos, Toledo, Salamanca, Ávila, Segovia, Zamora y Palencia, aunque sus informes resultaron muy valiosos al proporcionar amplios datos sobre la riqueza artística de un territorio. Las Comisiones Artísticas realizaban primero un reconocimiento general de los objetos para cuales eran las más consideradas a la hora de ser conservadas, para lo que después realizaban los correspondientes inventarios de bienes muebles. Nuevamente nos encontramos con que las dificultades tanto técnica como económica fueron muy amplias a la hora de desarrollar su trabajo los comisionistas. A pesar de ello, los comisionados de la Academia pudieron confeccionar el inventario de 37 conventos en la Corte. La comisión de Madrid, presidida por Juan Gálvez, actuaría en Madrid, Toledo y Alcalá. Los comisionados de las Academias tuvieron que enfrentarse con los grupos de compradores clandestinos que se movían por todas las ciudades, la mayoría de origen extranjero, comprando bienes artísticos directamente a las comunidades,

fundamentalmente de religiosas. Uno de ellos fue el barón Taylor y el pintor Dauzats, enviado por el rey de Francia, Luis Felipe, quienes adquirieron un gran número de obras clandestinamente, sin encontrar por ello una gran oposición. Al mismo tiempo los comisionados de las Academias encontrarían diferencias con las Comisiones de Amortización, ya que en muchas ocasiones las obras artísticas no se le consideraba su valor estético, sino simplemente económico, especialmente en el caso de retablos, tabernáculos, ya que el dorado, la riqueza de los materiales con que estaban hechos, eran considerados como piezas preciosas. Además muchas obras artísticas conventuales fueron depositadas al arzobispado, por lo que en muchas ocasiones se perdía la pista de su destino. El fruto obtenido por estas comisiones fue muy pobre tal como deja constancia sus propios informes, ya que la mayoría coinciden en la escasez de obras notables que se habían encontrados en los mismos. La razón lo encontraban en el hecho de que muchas comunidades al saber anticipadamente el destino que iba a tener de su patrimonio ante de la exclaustración, las vendería anticipadamente, al mismo tiempo la inoperancia de los gobernadores civiles a la hora de adoptar medidas hizo que muchas obras artísticas desapareciesen.

Con el fin de evitar el expolio y poder ubicar las pinturas que habían sido sacadas de los conventos desamortizados, la Academia de Bellas Artes acordó acogerlos en un Museo, para que pudieran servir para el estudio de las nobles artes, y fueran conocidas por el público al haber estado muchas de ellas en lugares inaccesibles, al haber estado situadas en los interiores de los conventos. Se barajaron varios edificios para instalarlos, siendo al final el antiguo convento de la Trinidad de Madrid el que fue finalmente designado para en principio depositar las obras artísticas que iban a ser expuestas<sup>2090</sup>. El 10 de junio la Academia solicitaría formalmente al Ministro de la Gobernación la concesión de la Trinidad para el Museo Nacional, petición que no tuvo respuesta por lo que nuevamente el 4 de octubre se volvería a enviar una nueva solicitud, y es que ya en el inmueble conventual desde finales de 1836, se había ido instalando un gran número de bienes artísticos procedentes de conventos desamortizados, no solamente de Madrid, sino también de Alcalá, Toledo y Ávila, por lo que surgió la idea de destinarlo a museo. Sería declarado el inmueble de utilidad pública por Real Orden de 29 de julio de 1834 (art.24) y unos meses más tarde se concedió para Museo Nacional (Real Orden de 31-12-1837)<sup>2091</sup>. La génesis del nuevo museo aparece reflejado en las propias páginas de la revista *El Artista: Con igual satisfacción anunciamos a la juventud artística*

---

<sup>2090</sup> La Academia de Bellas Artes de Madrid propuso varios edificios, siendo el antiguo convento de San Felipe, el Real, el preferido, un edificio de Juan Herrera que reunía las condiciones idóneas para el uso público que se quería dar. También propuso el de Santo Tomás, la Trinidad, Carmen Calzado y la Merced.

<sup>2091</sup> NAVARRETE PRIETO, B. "La creación del Museo de la Trinidad. Datos para su estudio" en *Academia*, 83, pp.509-526. .

*española (...) que presto tendrá lugar de admirar y estudiar cómodamente en un museo nacional, las hermosas obras de nuestra escuela de que hasta ahora se habían visto privado. En efecto, ha concedido el Gobierno para este fin el espacioso y bello convento de la Trinidad, con esto hemos recibido un bien duplicado –la instalación de un edificio público necesario, y la conservación de un templo magestuoso y elegante, cuya ruina hubieran deplorado nuestros artistas<sup>2092</sup>.*

Como señala Bolaños, se había fundado un museo de de nacional al nuevo Museo, frente al carácter real, y en cierto modo privado, del ubicado en el Prado. Sin embargo, el carácter público se limitaba a su exposición y apertura al público en general de las colecciones que se exponían en el inmueble, pero la propiedad de los cuadros quedaría en manos de la Academia de Bellas Artes, por lo que no se consideraba propiedad nacional propiamente dicho. Lo público por consiguiente sigue refiriéndose en este momento a su carácter expositivo, pero no contiene la idea de propiedad de la nación, de bienes nacionalizados, al pertenecer a una institución privada, aunque fuera de carácter cultural, como era la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los bienes artísticos de la colección no solamente provendría de los conventos extinguidos (especialmente los Carduchos de la Cartuja del Pualar), sino que algunos otros procedería de colecciones pictóricas que el Gobierno había expropiado, como el del Infante Sebastián de Braganza, un hermano de Fernando VII, que se había pasado al bando de los carlistas. El museo abriría el 24 de julio de 1838, aunque las labores de inventario y catalogación no se pudieron realizar, por lo que redujo a una exposición parcial de las obras recogidas, de ahí que cerrara poco tiempo después, con el objeto de acometer las obras de restauración pertinente y el acondicionamiento de las salas<sup>2093</sup>. Sin embargo, en 1841, el Gobierno tomaría la decisión de de hacerse cargo del Museo, por lo que retiró la posesión del edificio, cesó a la comisión directiva y nombre a un nuevo director adjunto, Javier de Quinto, lo que causaría un enfrentamiento directo con la Academia de Bellas Artes, quien reclamaría el edificio conventual, al que consideraba de su propiedad así como los efectivos que estaban depositados en el inmueble, siendo contestada que al Gobierno le pertenecía dichas obras, que se había hecho con gastos públicos. En 1842 se volvería a abrir, pero sus treinta años de existencia fueron muy negativos, no solamente porque no presentaba unas mínimas condiciones de exposición, sino porque algunas de las colecciones del museo, como la expropiada al infante Sebastián Gabriel, en 1854, sería devuelta por lo que mermó significativamente sus fondos<sup>2094</sup>. En 1872 el museo de la Trinidad sería cerrado definitivamente y

<sup>2092</sup> El texto está recogido de una nota sin firma titulada *Protesta de la Academia de San Fernando por el proyecto de demoler ciertos conventos* en *El Artista*, III, pp.103-104. Madrid, 1835-1836.

<sup>2093</sup> BELLO, Josefina, 1997, pp.313-317.

<sup>2094</sup> ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO, M<sup>a</sup> Dolores “El Museo de la Trinidad, germen del museo público en España”, *Espacio, Tiempo y Forma*, Madrid, Serie VII, Tomo II, 1998, pp.392 y ss.



las obras artísticas de los antiguos conventos serían trasladados al museo del Prado, que en este momento había sido nacionalizado.

La causa carlista que fue acogida por un amplio sector del clero dio lugar a una serie de normas claramente anticlericales, al abandonar su destino de forma sospechosa, por lo que se promulgó el **Real Decreto de 24 de septiembre de 1836**, en la que se mandaba ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que sin licencia se hallara en el extranjero, recogiendo en la propia normativa que el legislador había tomado esta determinación, al no cumplir los religiosos con el cumplimiento de sus sagradas obligaciones que les imponía su residencia personal que iba conjuntamente con el disfrute de sus prebendas y beneficios, por lo que la ausencia del Reino había causado no sólo al servicio eclesiástico, sino también a la causa pública. La consecuencia fue evidentemente la ocupación y aplicación a las urgencias del Estado de las temporalidades de todos los eclesiásticos españoles que se hallaran fuera del Reino. Al entregar muchos miembros de la Iglesia a la causa carlista, se aprobó **la Real Orden del 29 de noviembre de 1836**, en la que se ponía en seguridad los caudales y alhajas de las Iglesias, aunque se señalaba que solamente se trataba de una medida de simple depósito. Los bienes eclesiásticos a depositarse eran todos los caudales, oro y plata labrados, alhajas y objetos preciosos de cualquier especie, sin ninguna excepción, que existían en las catedrales, colegiadas, parroquias, santuarios, ermitas, hermandades, cofradías, obras pías y demás establecimientos eclesiásticos en cada provincia, trasladándose estos bienes a sus respectivas capitales o fortalezas cercanas, regulándose incluso la forma de ser custodiados. Aunque el objetivo teórico de esta medida era reguardar del pillaje de los carlistas, en el contexto político que se estaba viviendo parece poco creíble que se tratara solamente de una norma de mero depósito<sup>2095</sup>. La Ley de **21-25 de enero de 1837** mandaba devolver los bienes nacionales de los que compraron en virtud de las leyes de 1820 a 1823.

#### **2.3.4.3. Las Comisiones Científicas y Artísticas. Real Orden de 27 de mayo de 1837.**

En la Real Orden de **27 de mayo de 1837** se establecía la creación de las Comisiones Científicas y Artísticas que tendrían como objetivo la salvaguardia de los bienes históricos-artísticos del patrimonio conventual expoliado, una medida que según Bolaño, era equivalente, en cierto modo, a la ley Chaptal dictada por la República francesa en 1801, por la cual quince museos provinciales había recibido fondos artísticos procedentes de las nacionalizaciones y los expolios en el extranjero, hasta entonces ubicados en el Museo Central de París, representando un esfuerzo de descentralización administrativa. La Exposición de Motivos ya establece como objetivo la creación de museos por lo que *fundamente S.M. la esperanza de ver en breve á salvo de la*

---

<sup>2095</sup> GARCIA GARCÍA, Ricardo, 2000, p.95.

*codicia extranjera, y convertida en provecho de la ilustración nacional, la vasta riqueza que España posee en obras de literatura, ciencias y artes. Provincias hay en que el celo de las autoridades, superando todos los obstáculos, ha reunido ya en parage reunido estos objetos, y concluidos sus inventarios clasificados; y las hay también en que, llevando á su complemento las miras del Gobierno, erige bibliotecas y museos, que en breve podrán abrirse al público estudioso. En su artículo 2º se establecería que la Junta estaría presidida por un individuo de la diputación provincial ó del ayuntamiento, y compuesta de cinco personas nombradas por el gefe político é inteligentes en literatura, ciencias y artes, que tendría como tarea primordial la elaboración de un inventario general, reuniendo los inventarios particulares (...) en el cual designará las obras que merezcan, según su juicio, ser conservadas, y las hará trasladar inmediatamente á la capital. Los bienes serían destinados a la configuración de museos y bibliotecas, en aquellos pueblos donde por su importancia se crea útil plantear dicho establecimiento mediante la aprobación del Gobierno (art.3º). La financiación de las Comisiones se haría con la venta de los objetos que se declarasen desechables, por lo que así se reinvertiría en la formación de inventarios como a la constitución de museos y bibliotecas (art.4º). Al mismo tiempo los jefes políticos remitirán á este ministerio en el término de dos meses, contando desde el día en que se reciban la presente instrucción, copia del inventario general clasificado, con separación de las obras conservadas y de las destinadas á la venta pública, proponiendo al mismo tiempo todo cuanto sea necesario para la definitiva instalación de las bibliotecas (art.5º).*

Las Comisiones Científicas y Artísticas se encontraron con los mismos problemas a la hora de ejecutar las funciones por lo que se habían creados. La falta de información fidedigna sobre las obras que habían sido requisadas, el abandono de muchas obras artísticas tanto en el propio convento suprimido, como en los propios caminos, la inestabilidad de los caminos en el caso de que los inmuebles estuvieran situados en los campos y tuvieran que trasladar las obras, las convulsiones de la guerra carlista o la desjadéz del gobierno. Cabe mencionar las discrepancias e incluso conflictos jurídicos que se van a producir entre la Academia de Bellas Artes de San Fernando y las Comisiones Científicas y Artísticas, especialmente producido por la adquisición en propiedad de muchas de estas obras que habían sido depositadas de los conventos desamortizados<sup>2096</sup>. Como consecuencia de las Comisiones

<sup>2096</sup> Se trata ni más ni menos de conflictos por la propiedad de los bienes incautados. A comienzos de 1836, el gobernador de Valladolid pidió a la Academia de la Purísima Concepción poder depositar los objetos artísticos rescatados en sus salas hasta que el Gobierno tomara una decisión sobre ellos. De buen grado fueron acogidos por la Academia los bienes de los antiguos conventos, que fueron clasificados y ordenados. Sin embargo, cuando se instauró la Comisión Científica y Artística en la ciudad al disponer de los objetos artísticos que aun no se habían retirado no se pondría en contacto con la Academia por lo que se fueron instalando en otra sede. La Academia quiso retener las obras al considerarlas en propiedad, fundamentada en las disposiciones contenidas en el Real Decreto de 8 de marzo, y por la Real Orden de 25-5-1837, que mandaba que formasen museos provinciales. Sin embargo, el Gobernador y la

Científicas y Artísticas se fundarían los museos provinciales de Bellas Artes, que nacerían con un desamparo administrativo y económico manifiesto. Sin embargo, se convierte en verdaderos precedentes del modelo de museo público frente al de concepción privada abierta al público, que hasta este momento se había implantado en el ámbito español<sup>2097</sup>. A pesar de la creación de estas Comisiones, la Academia de Bellas Artes siguió teniendo un papel evidente en la política tutelar del Patrimonio Monumental, como lo demuestra la promulgación de **Real Orden de 7 de junio de 1837** en la que constaba una solicitud de la docta institución sobre conservación de algunos edificios de los antiguos conventos, *que por sus bellas formas, su perfección artística, su grande efecto y su interés para las artes, dice, deben conservarse á toda costa, destinándose á oficinas públicas, tribunales ú otros establecimientos, por lo que se ha servido mandar que los gefes políticos, oyendo á las respectivas diputaciones provinciales, academias, sociedades económicas y demás corporaciones que tuvieran por conveniente, remitan á este ministerio en el término de un mes, contando desde el día en que reciban la presente orden, su informe acerca de lo expuesto por la academia de S. Fernando.*

El proceso desamortizador de Mendizábal, que había sido interrumpido por la caída de su Gobierno, fue reanudado cuando volvió a ocupar el cargo de Ministro de Hacienda. En esta ocasión, las Cortes elevarían a la categoría de ley los decretos promulgados con anterioridad, con fecha del **29 de julio de 1837**, bajo el que se suprimían todos los conventos y monasterios masculinos, a los que se le añadirían a las órdenes femeninas (art.1), exceptuándose los colegios de misioneros para la provincia de Asia establecido en Valladolid, Ocaña y Monteagudo (art.2), así como los escolapios (art.III), las casas de los antiguos hospitalarios que se convertirían como establecimientos civiles (art.4), algunas casas de las Hermanas de Caridad de San Vicente de Paúl (art.5), y algunas casas de beatas dedicadas a la hospitalidad y enseñanza (art.6). Se volvería a reiterar la prohibición de conservar aquellos conventos que no tuviese doce miembros, ni se volverían abrir los que estuviesen cerrados (art. 10), no subsistiría en una misma población más de un solo convento de una

---

Comisión entendieron que las obras que había cedido a la Academia era en consideración de depósito, e incluso el gobernador estimó que una riqueza provincial perdería el carácter de tal en el momento en el que se hiciera afecta a una corporación particular como era la Academia. Nuevamente se va a solicitar a la Academia que entregase los cuadros que tenían en su poder, a lo que se negaría en varias ocasiones, hasta que finalmente no tuvo más remedio que devolverlos. En 1842, se abriría el Museo Provincial en el colegio de Santa Cruz.

Cabe mencionar también la pugna que mantuvo la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con la Comisión en Granada por la adquisición del grupo escultórico del Santo Entierro llamado de Becerra, que lo reclamaba basándose en la Real Orden de 9-4-1836 por la que se les concedían obras importantes con destino al Museo Nacional. La comisión se entregaría a entregarlo al estimar que la ley había quedado derogada por una posterior que mandaba formar museos provinciales. El grupo se concedería a la Comisión por la Real Orden de 10-11-1838.

<sup>2097</sup> El primer museo que se va a fundar a nivel provincial sería el de Guadalajara, abriéndose el 19 de noviembre de 1838, en un edificio que perteneció al monasterio de religiosas de La Piedad, inaugurándose con cuatrocientos cuadros, la mayoría pertenecientes a los conventos que habían sido desamortizados de la ciudad y de los del pueblo de alrededor. En 1839 se abrió el de Granada y Valencia.

misma orden (art.10), así como las medidas de exclaustración pertinentes para aquellas religiosas que la solicitasen (art.12)<sup>2098</sup>, al mismo tiempo que todos los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de todas las casas de comunidad de ambos sexos, se aplicarán a la Caja de Amortización para la extinción de la deuda pública (art.20). Posteriormente, por virtud de la **Real orden de 9 de agosto de 1837** del Ministerio de Gracia y Justicia, desarrollaría la normativa exclaustradora del mes anterior, se vuelve a incidir en la colaboración que debe existir entre las distintas administraciones que debían de salvaguardar los bienes del Patrimonio Monumental, volviéndose a dar una amplia impronta a las Juntas Diocesanas.

Se exceptuarían de las ventas para seguir aplicándose a sus destinos iniciales *los edificios de las iglesias catedrales, parroquiales, anejos o ayudas de parroquias; el palacio de cada prelado, las rectorías, casas o habitaciones de párrocos y sus tenientes y los seminarios conciliares con sus huertos o jardines adjuntos* (art.4) Ley 26-28 de junio de 1837.

La demolición de conventos se va a regular en la **Instrucción de 1 de septiembre de 1837**, sobre demolición de las ventas, por lo que todos aquellos edificios que estuviesen muy deteriorados o amenazando ruina, serían demolidos, para lo que se articulo todo un procedimiento administrativo, por el que las Juntas intervendrían en la demolición y los peritos correspondientes para poder designar el estado del inmueble. Es muy peculiar **Circular de la junta de enagenación de edificios de los conventos suprimidos, relativa a la ejecución de la Real Orden de 19 de febrero, en que se autorizaba la Junta Superior dar habitación en los conventos suprimidos de esta corte á las viudas y huérfanas pensionistas del Estado, que por falta de pago de sus respectivas asignaciones se vieses constituidas en la miseria, elevando la propuesta de las concesiones que se hicieran á su Real aprobación, y entendiéndose estas provisionales con la obligación de evacuar las agraciadas en un corto plazo el convento que se enagenara ó se aplicase á algún objeto de utilidad pública;** y por otra **Real Orden de 28 del mes de junio de 1836** se ha servido S.M. ampliar los efectos de la anterior á todas las capitales de provincias donde, á juicio de las juntas de enagenacion, existan conventos aplicables á este fin, con sujeción a los mismos trámites y condiciones establecidas en ella. Como apunta Josefina Bello, las ventas y derribos de monasterios y conventos se sucederían hasta 1844. En respuesta a la **Real Orden de 11 de febrero de 1838**, de acuerdo con la exposición de la Academia sobre la conveniencia de conservar algunos edificios de los conventos suprimidos, se conoce el Oficio del Jefe Político D. Pedro Gómez de la Serna al Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación , en fecha del 24 de octubre de 1838: que por sus bellas formas sean de interés para las artes y cuya existencia puede conciliarse con el mejor servicio del Estado, destinándolos a oficinas, tribunales, museos u otros establecimientos de pública

<sup>2098</sup> GONZALEZ RUIZ, Manuel “Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX”, *Revista Española de Derecho Canónico*, 1946, p.396.

utilidad. Con el decreto de **9 de diciembre de 1840** se declararía en estado de venta *todos los edificios que sirvieron de monasterios o conventos de las suprimidas comunidades religiosas de ambos sexos que no hubiesen sido ya enajenados en venta real (...) y que no estuviesen ya aplicados o destinados a objetos de utilidad pública*. Por Orden del 16 de diciembre de 1840 se suprimirían las Juntas de enajenación de edificios y efectos de conventos creados a virtud de 13 de septiembre de 1836, siendo sustituidas por la Junta de Ventas de Bienes Nacionales, que tendría la obligación de informar al Ministerio de Hacienda sobre las ventas efectuadas de los bienes inmuebles desamortizados.

#### **2.3.4.4. El destino de los bienes muebles conventuales: el caso de las joyerías y pedrerías de los conventos.**

Durante esta etapa se va ir promulgando una serie de disposiciones normativas de protección del ajuar litúrgico de interés histórico y artístico que se había convertido en piezas del mercado artístico. En el **Real Decreto del 13 de julio de 1835**, se había dispuesto que los vasos, ornamentos y alhajas de carácter religiosos no serían destinados a la venta, sino que los obispos se encargarían de distribuirlos entre las iglesias que permanecieran abiertas. Sin embargo, surgieron amplias discrepancias entre los obispos y los comisionados al no ponerse de acuerdo cuando un objeto era contemplado como un instrumento de culto y cuando lo era como una obra de arte. Aunque en un principio, muchos objetos de carácter religiosos pudieron salvarse, con el recrudecimiento de las guerras carlistas, y la búsqueda de recursos para financiar las campañas de Espartero, se dispuso por Real Orden del 30 de agosto de 1836 que *conveniéndolo destinar a los crecidos gastos de la guerra cuantiosos recursos puedan allegarse sin gravamen de los pueblos, y atendiendo a la necesidad de acrecer las medidas que deben producir las exenciones del servicio militar entraran en el tesoro de la Nación los productos de las rentas de todas las alhajas, muebles y enseres que habiendo sido de la pertenencia de las comunidades religiosas suprimidas, vengan a quedar sin destino o resulten sobrantes después de satisfechas las necesidades preventivas*, a la que se uniría el **Real decreto de 6 de octubre de 1836**. Por la ley de extinción general de los conventos de julio de 1837 se podrían disponer para las parroquias pobres, los vasos sagrados, ornamentos y demás objetos pertenecientes al culto, exceptuando aquellos que por su rareza o mérito artístico conviniese cuidar, así como aquellos que por su considerable valor no correspondiera con la pobreza de las iglesias. Como apunta José Manuel Rodríguez Domingo, estos bienes muebles fueron subastados, pero ante el escaso beneficio obtenido, se optó por hacer valer su componente material para la acuñación de moneda, de la que tan necesitada estaba el Estado, puesto que los pagos de las fincas enajenadas se verificaban normalmente en letras y labranzas a largo plazo. El pago de las alhajas rematadas debía hacerse en metálico, y se contemplaba hasta una reducción del 3% o 4% de su importe en segunda subasta, por lo que no estimuló a los



posibles compradores, más inclinados en invertir en fincas rústicas. De ahí que se dispusiera la **Real Orden de julio de 1837 para que el remate de las alhajas de los conventos suprimidos fuera en dinero y no en letras o libranzas**. A pesar de ello, se comenzó a estimular una serie de medidas en orden a tutelar la pérdida que estaba sufriendo el Patrimonio Nacional de un gran número de joyas y pedrería. La **Real Orden de 16 de septiembre de 1837**, por el que la plata y alhajas de los conventos suprimidos fueran reunidos en iglesias, se puede considerar un primer paso en la conservación de este tipo de bienes. En su artículo 1º se establecía que se pondría a disposición del Gobierno con el único y exclusivo objeto de atender a los gastos de la guerra las alhajas de oro y plata labradas, joyas y pedrería, que, como pertenecientes á las Catedrales, Colegiales, Parroquias, Santuarios, Ermitas, Hermandades, Cofradías, Obras Pías y demás establecimientos eclesiásticos, se inventariaron y debieron depositarse, al tenor de lo prevenido en el Real decreto de 6 de octubre de 1836. En su artículo tercero se establecía la constitución de una Junta de Alhajas en cada provincia, la cual debía redactar un inventario general de todas las alhajas de oro y plata labradas, joyas y pedrería pertenecientes a las Catedrales, Colegiatas, Parroquias, Santuarios, Ermitas y demás establecimientos eclesiásticos que las Cortes han puesto a disposición del Gobierno por atender a los gastos de la guerra. La citada Junta estaría presidida por el Intendente, dos miembros de la Diputación Provincial, dos ciudadanos nombrados por esta Corporación, y un secretario que redactase un inventario general y minucioso de dichas alhajas, el cual sería remitido al Gobierno, y éste lo pasaría en copia a las Cortes, publicándose en todos los periódicos oficiales de la Nación. Debía además formarse un inventario de aquellas alhajas que a juicio de la Diputación Provincial tuviesen un relevante mérito artístico o fuesen objeto de devoción popular cuando que dicha corporación exprese a continuación en qué consiste el mérito y la causa de la devoción que se les preste para que el Gobierno pueda, con conocimiento de causa, aprobar su subsistencia en las iglesias (art.6). Se puede poner como ejemplo el caso estudiado por José Manuel Rodríguez Domingo, de la Catedral de Guadix, cuyo cabildo remitió una exposición documentada a la Reina Gobernadora solicitando *la permanencia de sus alhajas, por ser necesarias al culto y tener algunas un especial mérito artístico*, circunstancia que fue atendida por el Gobierno de forma excepcional<sup>2099</sup>.

La posesión de estos objetos era tan preciada y apetecible que con frecuencia se tuvo que recurrir a los propios comisionados y delegados eclesiásticos ante la desaparición constante de joyas, cuya custodia tenían a su cargo. Su responsabilidad y las de sus herederos se vio a menudo afectada en largos y complejos procesos judiciales por delitos de ocultación y venta

<sup>2099</sup> RODRIGUEZ DOMINGO, José Manuel La enajenación de alhajas durante el proceso desamortizador de Mendizabal en Granada (1834-1840) *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, N.27, 1996, p.137.



fraudulenta de alhajas y vasos sagrados. A raíz de ello se comenzaría a publicar una serie de disposiciones en orden a tutelar estos bienes, como podemos comprobar en la **Real Orden del 3 de octubre de 1838** mandando la venta de las joyas y pedrerías procedentes de las iglesias y conventos suprimidos que existen en la casa de moneda de esta corte, por lo que se autorizaba *que se anuncie al público la venta de las joyas y pedrerías procedentes de las iglesias y conventos suprimidos, que existen en la casa de moneda de esta corte, por medio el Diario de Avisos, Gaceta y otros periódicos de Madrid y capitales de provincia, expresando en los anuncios la clase y cantidad de aquellas y su valor, con sujeción á lo que aparezca en las tasaciones: que se admitan proposiciones aparte de las mismas en el caso de no haberlas para la totalidad, y que estas proposiciones al todo o á una parte se anuncien también con la suficiente expresión en el Diario de avisos por un breve término, pasado el cual se adjudicarán en pública subasta al mejor postor, celebrándola se este acto por la intendencia, y asistiendo á él dos individuos de la junta de alhajas y el contador de la provincia; y por último, que dichas joyas y pedrerías se expongan al público en la misma casa de la moneda, en que actualmente se hallan, colocándolas de modo que puedan verlas cómodamente los concurrentes.* Curiosamente el mismo destino iba a correr las campanas de las iglesias procedentes de conventos y monasterios, que por el **Real Decreto de 9 de septiembre de 1837**, en su artículo 4º se precisaba *que entrarán en el tesoro de la nación los productos que rindan en venta las campanas de todas las iglesias de los monasterios y conventos suprimidos.* Unos días después, a finales de octubre, Mendizábal envió otra orden a los intendentes para que pusiesen en venta todas las campanas en pública subasta. Lo que realmente interesaba de la campana sería el metal, por lo que se vendía a peso, y lo adquiriría el mejor postor. Los dorados de los retablos también fueron objetos de enajenación, debido al oro que estaba incrustado en la base de madera. A lo largo de diez años un gran número de retablos fueron desposeídos de su riqueza ornamental, siendo el daño de muchos de ellos irreparables, por lo que posteriormente su práctica fue prohibida<sup>2100</sup>.

#### 2.3.4.5. Los Archivos Monacales como génesis del Archivo Público.

El saqueo de las bibliotecas conventuales fue un hecho a raíz de las medidas desamortizadoras, tal como aparece reflejado en algunos textos de la época. Problemas de espacios, falta de liquidez y necesidad de traer más y más libros de otros conventos y monasterios fueron una combinación letal. Desechados por ser duplicados, por estar en mal estado o por ser considerados de escaso valor, entre 1837 y 1838 fueron vendidos a peso en diversas subastas cantidades muy superiores a las que se conservaron. En 1842, Melchor Ferrer, antiguo presidente de la Comisión de Monumentos de Valencia, consideraba que los libros restantes (después de haber dado un amplio lote a la Universidad

---

<sup>2100</sup> BELLO, J., pp.370-371.

Literaria), que se consideraron como desecho y absolutamente inútiles, con arreglo a reales órdenes, autorización de los señores gefes políticos, previo aviso en los periódicos y remate público celebrado ante escribano, se vendieron al peso a favor de los más beneficiosos postores<sup>2101</sup>. Como había ocurrido con los objetos artísticos, las medidas desamortizadoras abrirían el camino de configurar a los bienes del patrimonio documental como bien de interés público. De esta manera al mismo tiempo que se buscaba un destino a los cuadros, pinturas, y todos objetos muebles que tuviera un interés artístico e histórico, se va a intentar proteger el llamado Patrimonio Documental, especialmente los libros y archivos que habían pertenecido a las órdenes religiosas, que en principio no se le atribuía ningún valor, y que en esta etapa va a experimentar una impronta sin precedente, naciendo las Bibliotecas y Archivos Nacionales, no solamente en Madrid, sino que irradiaría por todas las provincias. Gómez Hernández puntualiza como *la consideración del libro como parte del patrimonio cultural común de la nación había dado lugar a su inclusión entre las medidas de desamortización realizadas por Mendizábal. El Estado se apropia de valiosísimos fondos bibliográficos antiguos, y aunque con dificultades y pérdidas, intenta organizarlos, reuniéndolos y conservándolos a través de las bibliotecas de los centros de enseñanza secundaria y de universidades, donde las había, y que se convertirán también en Bibliotecas Provinciales, así como mediante algunos centros que se crearán pronto(...)*<sup>2102</sup>. Una serie de medidas legislativas de protección de los fondos conventuales durante esta etapa se podría considerar como el germen de la tutela administrativa del Patrimonio Documental. Con la creación de las Comisiones científicas y artísticas depositándose por esta vía el depósito de unos 70000 volúmenes procedentes de los conventos madrileños afectados por la desamortización. La **Real Orden de 27 de mayo de 1837** sería la primera disposición legal sobre creación de bibliotecas públicas con los libros de los conventos suprimidos. A la biblioteca así creada se le denominó primeramente como biblioteca provincial, siendo posteriormente sustituido por el de biblioteca provincial y universitaria. A raíz de la **Real orden del 22 de septiembre de 1838** establecía que fuesen las universidades las que se harían cargos de los libros de las comunidades extinguidas, para lo que se fundarían bibliotecas públicas. En la Exposición de Motivos se fundamentaba la primacía de las universidades sobre las propias comisiones: *Varias son las disposiciones que se han dictado hasta ahora para utilizar las riquezas literarias que encerraban los suprimidos conventos, y formar con ellas bibliotecas públicas en las capitales de provincia; pero á pesar del laudable celo de las comisiones creadas al efecto, no se han podido lograr todavía completamente en esta parte los deseos del Gobierno, ya por falta de local conveniente, ya por la escasez de recursos para los gastos indispensables. En tal estado S.M. la Reina*

<sup>2101</sup> MUÑOZ FELIU, Miguel C. Liberalismo, desamortización y política bibliotecaria. El caso valenciano en *Anales de documentación*, Núm.9, 2006, pp.133-141.

<sup>2102</sup> GOMEZ HERNANDEZ, José A. "La preocupación por la lectura pública en España: Las Bibliotecas Populares. De la Corte de Cádiz al Plan de Bibliotecas de María Moliner". *Revista General de Información y Documentación*, 1993.

*Gobernadora ha creído que confiando este encargo á corporaciones que por su naturaleza tienen un interés más directo en la realización de esta empresa, se logrará llevarla a cabo en muchas partes con más prontitud y acierto, como ha sucedido con la universidad de Valencia, que en breve tiempo y con sus propios recursos ha reunido más de 300 volúmenes en una espaciosa biblioteca. Por lo tanto S.M. ha tenido á bien disponer que en las provincias donde hubiese universidad reemplace este cuerpo literario á la comisión artística en la reunión, colocación y arreglo de los libros procedentes de los suprimidos conventos, pero en la inteligencia de que no ha de considerar la biblioteca que se forme como propiedad exclusiva suya, aunque sí podrá servirse de ella, sino como establecimiento público, de cuya conservación estará encargada.*

### **2.3.5. Las medidas protectoras durante el régimen del general Espartero.**

Durante la Regencia del General Espartero se prolongarían las medidas desamortizadoras especialmente a raíz de **la Ley de 2 de septiembre de 1841**, en la que se declaraban en su artículo 1º como bienes nacionales todas las propiedades del clero secular, encargándose el Gobierno de la administración y recaudación de las rentas para aplicarla a la dotación del culto y del clero, por lo que seguía el mismo espíritu del artículo 2º de la Ley 24-29 de julio de 1837, por lo que se nacionalizaban los mismos bienes que en aquellas se declaraban aquí nacionales, más ésta que aumentaba el número de bienes al considerar como tales a los *bienes, derechos y acciones de cualquier modo correspondiente a las fábricas de las Iglesias y a las cofradías*. Una vez declarados nacionales sería solo para justificar la venta que de ellos había de hacer el Estado, como de cosa propia, por lo que en virtud del artículo 3º se dispondría *que se declaraban en venta todas las fincas, derechos y acciones del clero catedral, colegial, parroquial, fábricas de Iglesias y cofradías de que tratan los artículos anteriores*.

Como apunta Manuel González Ruíz *no todos los bienes están incluidos en los primeros artículos; algunos se exceptúan. Pero adviértase que se exceptúan algunos bienes porque ya se había previsto por leyes anteriores a su enajenación, como los bienes de capellanía y fundaciones de sangre, o porque era de utilidad para el Estado, como los bienes destinados a la beneficencia e instrucción pública, o porque se consideraban como bienes de personas particulares, como los de cofradía y obras pías procedentes de adquisiciones particulares para cementerios y otros usos probados a sus individuos, o finalmente, porque eran de gravísima necesidad para el culto, y no lo podría haber enajenado el Gobierno sin grave protesta del mismo pueblo católico en su totalidad, como las iglesias catedrales, parroquiales y ayudas de parroquias (sólo estas) y la morada de cada obispo y párroco. Pero ninguna excepción fue hecha para favorecer simplemente a la Iglesia o para dejar en su poder algunos bienes, pues aun estos últimos se quedaban en poder de la Iglesia en cuanto al usufructo, no en cuanto al dominio y propiedad, ya que, si bien fueron exceptuados de las ventas, no lo fueron de la declaración de bienes nacionales, bienes que el Gobierno podría enajenar como propios en cualquier momento que creyese*

*oportuno*<sup>2103</sup>. Una Real Orden del 18 de septiembre de 1841 especificaría que una comisión especial de la provincia haría un inventario de las fincas, acciones o derechos<sup>2104</sup>. En la apertura de las Cortes el 26 de diciembre de 1841, Espartero informaría sobre el proceso desamortizador mediante los siguientes términos: *Se ha dado impulso eficaz a las operaciones previas a la venta de los bienes del clero por medio de instrucciones y reglamentos que tiendan a evitar los fraudes, y el Gobierno espera que muy pronto será cumplida la Ley. La enajenación de los bienes nacionales que proceden de las extinguidas comunidades religiosas se activa y las ventas prosiguen, aumentando la propiedad privada y disminuyendo la deuda pública.*

La Ley de 1841 estaría vigente escasamente tres años, al estar muy vinculada a la vida política del partido progresista en el poder, por lo que la caída de éste determinó necesariamente su derogación, o al menos, la suspensión de la ley<sup>2105</sup>. El efecto negativo sobre la protección tutelar de los bienes inmuebles religiosos desamortizados en la etapa de Espartero fue evidente, ya que a las pérdidas irrecuperables de los edificios conventuales se unirían los pertenecientes a catedrales y cofradías, aunque se exceptuaría los edificios de las iglesias catedrales, parroquiales, ermitas y santuarios anejos a las mismas, pero insistimos más por un factor predominante religioso, que por un interés propiamente cultural. Las ventas y derribos de los conventos desamortizados se prolongarían hasta 1844, ya que el gobierno de los moderados cambiaría la tónica marcada por los gobiernos liberales anteriores. La dificultad de enajenar el amplio número de conventos expropiados al no darles un uso práctico había acentuado el problema, por lo que el Estado tuvo que promulgar nuevos decretos, como el de **7 de agosto de 1842**, autorizando a la Dirección General de Amortización para que una Junta de Venta de Bienes Nacionales resolviese definitivamente sobre la venta de los conventos no considerados para uso público, sin necesidad de la autorización del Gobierno, marcando un plazo de dos meses para que ayuntamientos y diputaciones solicitaran los edificios conventuales que considerasen adecuados como utilidad pública (art. 2º) o **el Real Decreto del 30 de septiembre de 1842**, sobre la enajenación de los edificios ruinosos que poseía, en la que se dispuso que si no se vendían una vez tasados, podían ser derribados y sus solares puestos en venta<sup>2106</sup>.

### **3. Una nueva concepción jurídica del patrimonio monumental regio: el patrimonio real como dominio privado de interés nacional.**

Durante este primer periodo del Estado Liberal las colecciones regias de bienes de interés histórico y artístico van a seguir siendo un vehículo

<sup>2103</sup> GONZALEZ RUIZ, Manuel, 1946, p.399,

<sup>2104</sup> La Ley aparece publicada en la Gaceta de Madrid del 5 de septiembre de 1841.

<sup>2105</sup> TOMAS Y VALIENTE, F., 1989/1997, pp.597-598.

<sup>2106</sup> HERNANDEZ, F. 2002, pp.97-98.

legitimador de la identidad del Estado, no ya como exaltación de la propia Monarquía, sino como instrumento legitimador de la nueva Nación de ciudadanos, por lo que desde los círculos ilustrados del país, al igual que incluso de los propios políticos asistimos a una verdadera reivindicación de dar a conocer de dar a conocer al pueblo las colecciones privadas de la Monarquía, cumpliendo así el sueño iniciado por los ilustrados de cultivar a la población en los gustos artísticos, al mismo tiempo que este interés se extiende a la propia Monarquía que busca así definir plenamente su prestigio como heredero legítimo de las obras artísticas que identifica no solamente la institución real, sino el Estado que se identifica en su persona. No debemos olvidar que pesar de esta concepción nacional de las colecciones reales, su régimen de propiedad va seguir siendo privado, por lo que la Monarquía seguirá gozando de todos los derechos patrimoniales adheridos a los bienes del legado que han ido heredando paulatinamente. No hay por consiguiente una separación entre la propiedad privada de la Corona y propiedad del Estado en el ámbito de las colecciones reales, sino que se mantiene el dominio privado monárquico sobre los mismos. Sin embargo, cabría cuestionarse si el Monarca, al igual que cualquier propietario privado, podría haber vendido estos bienes sin ningún tipo de límite, hecho que los límites de exportación vigente se lo hubiera impedido, como podemos comprobar en la distinción que podemos observar en el régimen tutelar de estos bienes entre el reinado de Fernando VII y la Regencia de María Cristina, el primero más cercano al modelo del reformismo ilustrado y el segundo al modelo liberal.

### **3.1. Dominio Privado y Concepción Pública del Patrimonio Regio Monumental en el reinado de Fernando VII.**

Entre 1808 y 1814 las colecciones reales experimentaron un importante cambio en cuanto a su significado, ya que se comenzó a desarrollar la idea de que debía ser expuesta para uso público, en aras a que fuera conocida por los súbditos de la nueva Monarquía, pero siempre considerándose como propiedad privada del Soberano las colecciones de pinturas y esculturas que seguían poseyendo la Casa Real. De esta manera el Monarca va a actuar como un propietario privado en el ámbito de sus propias colecciones en dos momentos trascendentales: en el regalo que le va a ser al Duque de Wellington de las pinturas requisadas al Mariscal Soult, y en 1823, cuando la ciudad de Madrid fuera ocupada por el duque de Angulema con el objetivo de restablecer el absolutismo monárquico. En el caso del Duque de Wellington, las Cortes, por el Decreto de 22 de julio de 1813, le entregaron el Sitio y posesiones reales del Soto en Roma, al que luego una resolución de la Regencia, de 20 de febrero de 1814, agregaría la dehesa de Illora; el 28 de marzo de 1814, la Regencia otorgaría la correspondiente escritura de cesión del Soto de Roma en nombre de las Cortes. Este Soto, a petición del propio duque de Wellington, conservó

el carácter de Sitio Real, con el fin de seguir gozando de los privilegios del fuero privativo y otros inherentes a los antiguos dominios de la Corona<sup>2107</sup>. Con el restablecimiento del absolutismo monárquico, el Duque de Angulema recibió pinturas españolas del propio Monarca, quizás como apunta Antonia Morel D'Arleux con la buena intención de *propagar en la Nación extranjera el conocimiento de nuestras bellezas*<sup>2108</sup>.

### 3.1.1. La impronta del constitucionalismo docentista en la tutela del Patrimonio Monumental Regio.

Las Cortes de Cádiz el 22 de marzo de 1811 decretaron la enajenación de los edificios y fincas que formaban el antiguo Patrimonio Real, exceptuando tan solo los palacios, cotos y Sitios Reales, por lo que se reproducía la Real Cédula de 1800 de Carlos IV y la propia Carta de Bayona. La situación que va a quedar el Patrimonio Real con la proclamación de las Cortes de Cádiz como señala López Rodo es confusa, quien reitera el comentario que sobre el mismo va a realizar Cos Gayón al señalar *que al tratar de los palacios reales declaran las Cortes que pertenecen al rey, y en esa palabra parece que se reconoce en éste, solemnemente un derecho; pero al mismo tiempo se ordena que las Cortes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona ¿En qué razón podría fundarse tan extraña diferencia? ¿Cómo se puede explicar que en un mismo artículo se proclame el reconocimiento de la pertenencia al rey, respecto de los palacios, y la absoluta libertad de disposición en las Cortes, respecto a los sitios de recreo? ¿Era compatible con la existencia de un patrimonio particular o, por el contrario, debía entenderse que el rey era el único español que no podía tener ni adquirir bienes propios ni testar de ellos?*

En la **Constitución de 1812** se dispondría en su artículo 14 la nueva realidad jurídica del Patrimonio de la Corona, por el que se le asignaba al rey todos los palacios reales que habían disfrutado sus predecesores: *El Patrimonio de la Corona se compondrá de los palacios de Madrid, de El Escorial, de San Idelfonso, de Aranjuez, de El Pardo y de todos los demás que hasta ahora han pertenecido a la misma Corona, con los parques, bosques, cercados y propiedades dependientes de ellos, de cualquier naturaleza que sean.* Ya en el **Decreto del 28 de marzo de 1814** se deslindaría los bienes del Patrimonio, según el precepto constitucional, en la que se señalaba que en calidad de Rey, el Monarca dispondría además de una dotación anual, de los Palacios Reales que hasta este momento había disfrutado sus predecesores, a los que se unirían los jardines, bosques, dehesas y terrenos que se le otorgaría para su disfrute personal. Para ello sería nombrado *una Comisión especial de Cortes, en unión con los secretarios de Despacho de Estado, de Hacienda, Gracia y Justicia, y oyendo a los empleados de la Real Casa que tuviera por oportuno, propondrá al Congreso los terrenos que en su opinión deberán reservarse para el recreo de la persona del Rey, expresándolos con toda individualidad* (7). Al mismo tiempo la Comisión dividiría lo que se

<sup>2107</sup> LOPEZ RODO, L., 1954, pp.174-175.

<sup>2108</sup> MOREL D'ARLEUX, Antonia Origen y vicisitudes de cuatro óleos inéditos del siglo XVII que pertenecieron a la colección real, en *Goya*, Madrid, 1999, pp.72-73.



consideraba Patrimonio de la Corona, vinculado a la dignidad real, y el patrimonio privado del Rey, cuyos bienes pertenecieran como un dominio privado dotado con la misma naturaleza jurídica que un particular, por lo que *se manifestará al Congreso las fincas que del examen de los referidos documentos se hallare pertenecer al dominio privado del señor Fernando VII y de los señores infantes y hermano y tío, las cuales les quedarán reservadas como de su privativa propiedad, y deslindadas para que jamás se confundan con las que la Nación señala para recreo del Monarca* (8).

Como podemos apreciar, los Palacios Reales como Patrimonio Monumental serían adscritos al Patrimonio privado del Monarca. Así con la promulgación del **Decreto de 19 de abril de 1814**, se dota a la Monarquía para la conservación de su Patrimonio Privado, entre ellos los Palacios Reales de 40 millones de reales de vellón, por el que se tenía que sufragar los gastos que *causaren los Palacios, bosques, dehesas y terrenos que señalaren para recreo del Rey*. En el propio Decreto se disponía que se anticipase al rey un tercio de la dotación anual para que pudiese hacer frente al estado de penuria que se encontraba el palacio después del saqueo ocasionado por la presencia francesa, que se habían apoderado de más de veinte millones de reales en alhajas y de los metales más valiosos de la Casa Real. El **Decreto de 22 de mayo de 1814** se establecía la administración del Patrimonio de la Casa Real, separándola de los llamados bienes nacionales, estableciéndose el cargo de Mayordomo Mayor de la Casa Real, que debía de encargarse de todo los aspectos relativo al palacio, bosques y jardines reales, los alcázares, teniendo la consideración de Secretario de Despacho. Con la implantación del absolutismo regio, la situación del Patrimonio Real volvería a la situación anterior, al ser derogada todas las disposiciones de las Cortes de Cádiz, pero el paso inicial hacia una concepción pública del Patrimonio Monumental de la Corona se había dado sin ninguna duda. Así con la promulgación del **Real Decreto de 3 de marzo de 1819** declararían que habían quedado ilesas las disposiciones anteriores, por lo que el Patrimonio de la Corona volvería a recuperar su identidad jurídica anterior a los postulados constitucionalistas gaditanos.

El Trienio Constitucional marcará nuevamente el cambio de destino en el ámbito del Patrimonio Monumental. Las circunstancias anómalas que se estaban viviendo en este momento en el país, llevaría a las Cortes a promulgar el **Decreto de 30 de mayo de 1820**, por el que se deslindaba el llamado Patrimonio Privado del Rey, por el que le correspondería: 1º) en Madrid *el Real Sitio del Buen Retiro, el Casino, la Casa de Campo y Real Florida, con todas sus posesiones, y Montaña del Príncipe Pío*; 2º) en Aranjuez y Jarama, *el Palacio, jardines, Casa del Labrador, cortijo y los terrenos que se encuentran desde éste, línea recta a Bayona y luego río abajo hasta el arroyo de D. Gonzalo*, al mismo tiempo que se precisaba cual era la finalidad de esta medida: *Esta reserva se hace, no sólo con el objeto de que sirva de recreo a S.M., sino con el de conservar el precioso arbolado del Real Sitio. Resérvense también las casas de oficio y aposentos*

*necesarios para las jornadas, y las que hayan de ocupar los empleados que Su Majestad conserve; 3º) El Pardo, por el que quedan reservado el palacio, jardines, Casa del príncipe, el monte y la quinta del duque del Arco y la Zarzuela, con las casas de oficio y aposentos, y las necesarias para los empleados (...); 4º) San Idelfonso, por el que quedan reservados el Palacio, jardines, casas de oficio y de aposento, y las necesarias para los empleados, el Palacio de Balsain y de Riofrío (...); 5º) San Lorenzo, por el que quedan reservados el Palacio, el jardín, las dos Casas de Campo, la casa de oficio, aposento y de empleados. Se ceden las demás pertenencias y derechos de dicho Real Sitio; 6º) en Sevilla, quedan reservados los Alcázares y jardines; 7º) En Granada, queda reservada la Real Alhambra con sus jardines. Se cede todo lo demás que pertenece a S.M. en dicha ciudad y 8º) en Valladolid, queda reservado el Palacio y jardín con su huerta. Se ceden los demás edificios y huertas de aquella población (...).*

### **3.1.2. La creación de un Museo de pinturas fundamentado en el coleccionismo privado de la Monarquía: La gestación del Museo del Prado.**

La idea de fundar un museo nacional no era nueva, ya en muchos países europeos se había llevado a la práctica, todavía bajo los auspicios de la Monarquía: el primero sería el Rijksmuseum de Ámsterdam, fundada en 1815, la Gliptoteca de Munich, el Museo Nacional de Antigüedades de Copenhague, la National Gallery en Londres, etc. Sería la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid la que promoviera la idea de la creación del Museo, que a instancia de su director, Pedro Franco pidió al Monarca un edificio donde pudiese mostrar las pinturas que hasta este momento había adquirido la propia Academia, para lo que señaló el Palacio de Buenavista como lugar más idóneo<sup>2109</sup>. Desde un primer momento, pudo contar con el respaldo del propio Monarca, por lo que en virtud de una Real orden de cesión se le concedería el inmueble que había solicitado la Academia, expresándose en el preámbulo cuales los motivos del mismo: *El Rey deseaba acreditar el distinguido aprecio que le merecían las nobles artes, por lo mucho que contribuían a todos los ramos de la industria y al lustre y esplendor de la monarquía. De esta manera, a mayor gloria de la Monarquía y del propio Estado, la Academia quedaba encargada para organizar una galería de pinturas, grabados, estatuas y planos arquitectónicos y demás bellezas artísticas, con la comodidad y decoro correspondiente, así para la enseñanza y aprovechamiento de los discípulos y profesores como para poder satisfacer la noble curiosidad de naturales y extranjeros. El objetivo era primordialmente dar a España la gloria que tan justamente merecía. Sin embargo, un proyecto ajeno al proyecto, el inmueble había pertenecido al dominio privado de Manuel Godoy, que posteriormente había sido confiscado, que estaba pendiente de sentencia, más el amplio coste económico que suponía la acomodación de los bienes históricos-artísticos que se iban a exponer por lo*

<sup>2109</sup> DE SAMBRICIO, Valentín “El museo fernandino” *Archivo Español de Arte*, Tomo XV, Madrid, 1952, nº, 51, 53 y 54.

que el proyecto se paralizaría<sup>2110</sup>. El 2 de marzo de 1818 se publicaría en la Gaceta de Madrid ya se hacía referencia de un nuevo inmueble en la que se podría ubicar el nuevo museo, el palacio de Villanueva, que se encontraba en un estado de deterioro después de haber sido abandonado desde la ocupación francesa<sup>2111</sup>. El propio Rey como señala la propia Gaceta de 1818 contribuiría de sus propios fondos privados la reparación del edificio<sup>2112</sup>, por lo que ya se le daba una cierta prioridad a la intervención del Monarca como sujeto privado sobre el propio Estado, aunque en algunos sectores de la historiografía tradicional quieren señalar que la actitud del Monarca fue solo un acto de vanidad, incluso se menciona el hecho de que solamente quiso complacer a su esposa, Isabel de Braganza, versiones que como bien señala Gonzalo Anés no es del todo cierto. Una vez que se procedió a elaborar los inventarios de cuadros y estatuas con el fin de realizar así una mejor selección de obras para que fuesen instalados en el futuro Museo, y a condicionar el inmueble trazado por Juan de Villanueva, se procedería a la inauguración del entonces denominado Real Museo de Pinturas o Museo del Rey el 19 de noviembre de 1819, donde se exhibirían 311 cuadros pertenecientes a la colección regia, siendo su primer director el marqués de Santa Cruz<sup>2113</sup>. Había surgido la práctica museística cuya función primordial sería enseñar al público, las obras que hasta el momento habían sido ocultadas en las colecciones privadas, lo que fue despertando una verdadera sensibilización por el arte en sectores sociales que hasta este momento habían sido apartados de los ambientes artísticos<sup>2114</sup>.

La cuestión que se plantea en este estudio, es que si estas colecciones de pinturas que se mostraban al público tenían un carácter público, o por el contrario siguiendo la práctica habitual de los monarcas del despotismo ilustrado abría solamente con la intención de mostrarlos a sus súbditos, para que pudieran recrearse de la gloria de su rey, y de la nación que en él simbolizaba su persona. Bolaño ha analizado con amplia exhaustividad las circunstancias que suscitaron la creación del Museo en una etapa de convulsiones políticas y sociales, negando el hecho de que el Rey tuviese como objetivo abrir a una concepción pública de sus colecciones regias, sino que su objetivo ni más ni menos fue la de exaltar las glorias de una Monarquía que

---

<sup>2110</sup> Después de un amplio número de controversias con la Junta de Secuestro y el Consejo Real, el Palacio de Buenavista sería adjudicada al Museo Militar, por real orden de 8 de marzo de 1816. ANES, 1996, pp.80-86.

<sup>2111</sup> RUMEU DE ARMAS, Antonio, *Origen y fundación del Museo del Prado*, Instituto de España, 1980, pp.118-121.

<sup>2112</sup> Se estimó en siete millones de reales el coste de las obras, siendo consignados 24.000 reales de vellón el 22 de septiembre de 1818 del bolsillo secreto de Su Majestad, sumas que se incrementarían posteriormente, por lo que ya en septiembre de 1819, la cifra total ascendía a 833.420 reales de vellón. ANES, Gonzalo, 1996, pp.89-90.

<sup>2113</sup> GAYA NUÑO, Juan Antonio, *Historia del Museo del Prado (1819-1969)*, Editorial Everest, Madrid, 1969, pp.63-65.

<sup>2114</sup> ANES, Gonzalo, 1996, pp.87-91.

había padecido una profunda crisis de identidad<sup>2115</sup>. La privacidad en que habían estado sometidas fue suplida por este carácter aperturista de las colecciones regias, con la finalidad, como así aparece en la Gaceta de Madrid, *de propagar el buen gusto en materia de bellas artes, suministrar a los aficionados ocasión del más honesto placer y a los alumnos de las artes del dibujo los medios más eficaces de hacer rápidos adelantamientos*. Se consideraba al mismo tiempo que la exposición pública de las colecciones regias estaban dirigidas a todo tipo de espectadores, tal como aparece en uno de los Catálogos de la época: *el permiso de entrar, contemplar y estudiar esta magnífica y preciosa colección se concede tanto a los extranjeros como a los españoles, no reservándose tan solo a los poderosos (...) o a los profesores capaces de apreciar estas pinturas (...) Persuadido nuestro benigno soberano, que Dios guarde, de que la naturaleza no distribuye la perspicacia y el talento a medida de la situación y opulencia de los miembros de la sociedad quiere que a cualquier individuo del reino, como al más humilde de la capital, sea igualmente permitido excitar su capacidad si fuese apto para recibir las impresiones de la belleza*. Sin embargo, la titularidad privada de las colecciones regias que se expondrían en el Museo es un hecho indiscutible, no ya solamente por la propia denominación del mismo, sino por el propio reclamo como propietario de los mismos que el propia Monarca hará con la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis, ya que curiosamente ante la eventualidad de los posibles tumultos, se pintó en sus puertas un cartel con un logotipo que decía: Real Museo, propiedad del Rey. A la muerte del monarca, en 1833, ante la amenaza de la desaparición del Museo, y al verse disgregado sus colecciones entre los herederos, al estar sometida a un régimen de libertad testamentaria, situación que pudo dilapidar la rica colección regia, hecho que no ocurrió al ser designada como única heredera su hija Isabel, cambiando el nombre de la institución museística como Real Museo de Pintura y Escultura de Su Majestad. El museo del Prado tendría por consiguiente una concepción híbrida, ya que a pesar de su apertura pública, la titularidad sobre los bienes era primordialmente privada, al pertenecer íntegramente a la propiedad privada de la Corona. Incluso en la institucionalización administrativa del primitivo Museo del Prado, formaba parte del personal de la Casa Real, por lo que el propio director y encargado por el rey del proyecto sería su mayordomo mayor, cargo que ostentaba José Gabriel de Silva-Bazán y Walstein, marqués de Santa Cruz. En un escrito elevado al Rey por el Marqués se refleja el carácter privado de la gestión de la nueva Galería de Pinturas del Museo del Prado: *mientras que los cuadros permanecieron en palacios y casas de V.M. la compostura y conservación de ellos estaban a cargo del primer pintor de cámara de V.M. con dos ayudantes,*

<sup>2115</sup> En palabras de Bolaño, *De antemano, hay que señalar la particularidad de que el proyecto sigue un camino inverso al de otros modelos europeos, en tanto que el deseo de crear una galería de cuadros es totalmente ajeno a la idea de mostrar las colecciones reales (...) De ahí que el Consejo Real sugerirá la posibilidad de destinar a este fin las pinturas del patrimonio regio, diseñados en los palacios de Madrid y en Reales Sitios, como Aranjuez, San Idelfonso, el Pardo (...) Es probable que fuesen los propios franceses quienes le abriesen los ojos sobre el lustre que podía dar al trono la exhibición de un tesoro patrimonial tan excelente (...)*. BOLAÑOS, M., p.

*cuyos sueldos se pagaban por la tesorería de la Rl. Casa abonándose también por la misma los gastos de composturas. No haciendo pues novedad en esta parte, por el nuevo hecho de trasladarse las pinturas del museo, los cuadros serán en él igualmente restaurados o conservados sin gravamen a V.M. sin disminución de otros fondos ni recargo de sus vasallos. Adoptándose este medio sencillo en realidad, y económico al mismo tiempo nada más conforme a él y consiguiente, que considerar la galería dependiente del Rl. Palacio y los empleados en ella como criados de la Rl. Casa, pagados por su Tesorería<sup>2116</sup>.*

### **3.1.3. El carácter privado de los bienes de interés histórico y artístico del Patrimonio Regio en el testamento de Fernando VII.**

A la hora de tasar los bienes que formaban la herencia de Fernando VII fueron considerados los inmuebles los bienes propios de la Corona, los vinculados, mientras que los bienes muebles serían considerados de libre disposición. **El Testamento de Fernando VII de junio de 1830** dejaría claro el carácter privado de los bienes que compondría el Patrimonio Monumental de la Corona, dejando como heredera a su esposa, la Regente María Cristina. Así en la disposición 4º se precisaba la mejora y adquisición de nuevos bienes que se habían producido durante su reinado: *Declaro que, durante mi Reinado, he mejorado algunos bienes raíces de la Corona; y es mi voluntad que estas mejoras se consideren como parte de dichos bienes, así como también los diamantes y alhajas de oro y plata, que por ser propias de la misma Corona, consta en el inventario firmado y rubricado de mi mano, y que lleva dicho nombre, que se prolongaría en la disposición 5º: Declaro que en mi Reinado he adquirido por varios títulos algunas propiedades raíces, cuales son la dehesa de las Pozas, el Palacio de la Nueva Población de la Isabela, el puente sobre el Guadiela, la fábrica de loza de la Moncloa, la parte del jardín que se ha añadido a la casita de campo llamada del Infante D. Gabriel, en el Real Sitio de San Lorenzo, la casa y maquinas de la sierra de maderas en el pinar de Balsain, el puente verde y el de la Isleta, en el Real Sitio de Aranjuez, y todos los reparos que se hayan hecho en los demás Sitios (...)*

### **3.2. Hacia la concepción pública de las colecciones reales durante el periodo de las Regencias.**

Durante la regencia de María Cristina se va a gestando el camino de una verdadera concepción pública del coleccionismo real, aunque el testamento de Fernando VII de junio de 1830, dejaba claro que los bienes históricos-artísticos eran considerados como propiedad privada del Monarca, ya que en su disposición 4º, dispondría que las mejoras de los bienes raíces así como *también los diamantes y alhajas de oro y plata, que por ser propias de la misma Corona, consta en el inventario firmado y rubricado de mi mano, y que lleva dicho nombre: todo lo cual pertenecerá a mi sucesor o sucesora en el Trono.* Al mismo tiempo en la disposición 5º va a incluir una serie de bienes inmuebles que fueron adquiridos durante su Reinado y que serían considerado como propiedad

---

<sup>2116</sup> LUZON NOGUÉ, José María, Museo del Prado, Madrid, en *Los grandes museos históricos, Edición conmemorativa del 175 aniversario del Museo del Prado*, Fundación Amigos del Museo del Prado, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores,



privada del Monarca, *cuales son la dehesa de las Pozas, el Palacio de la Nueva Población de la Isabela, el puente sobre el Guadiela, la fábrica de loza de la Moncloa, la parte del jardín que se ha añadido a la casita de campo llamada del Infante D. Gabriel, en el Real Sitio de San Lorenzo, la casa y maquinas de la sierra de maderas en el pinar de Balsain, el puente verde y el de la Isleta, en el Real Sitio de Aranjuez, y todos los reparos que se hayan hecho en los demás Sitios (...)*<sup>2117</sup>. Al mismo tiempo, durante la etapa de la Regencia de María Cristina, el nuevo Museo del Prado, que había ido adquiriendo prestancia en el ámbito europeo, seguiría teniendo el carácter privado en cuanto a la propiedad de la colecciones de obras de arte expuestas en el mismo.

Curiosamente una de las cuestiones que suscito más polémica en la época reflejada en los periódicos de la época fue la cesión del tesoro del Delfín al Museo del Prado, al considerarse propiedad privada de la Casa Real. El problema comenzó cuando José Madrazo, nombrado por la Reina Regente en 1838 director del Museo, reclama la colección para el Museo alegando que su calidad artística primaba sobre el valor mineralógico, lo que suscitó una amplia oposición por parte de amplios sectores de la opinión pública, especialmente en los artículos aparecidos en el *Eco del Comercio*, entre marzo y mayo de 1839. Incluso el propio Madrazo, en una carta enviada a la Reina fechada el 23 de marzo de 1839, comenta el recelo y la oposición que está teniendo por el hecho de trasladar las joyas del Tesoro del Delfín al Museo del Prado: *La Reina Gobernadora ha mandado poner una Real Orden para que los famosos vasos de cristal de roca y ágata, y las alhajas de los camafeos del Gabinete de Historia Natural, pasen al Real Museo, por ser más propio de este lugar, pero la Dirección general de estudios, de la que es presidente Quintana, se ha opuesto, y, lo que es peor, ha hecho poner varios artículos injuriosos en el Eco del Comercio, dando entender del modo más pícaro y malicioso que se trataba de extraer las alhajas del Gabinete de Historia Natural con el fin de venderlas, suponiendo que eran de pertenencia de la Nación, cuando no es así, pues son del Real Patrimonio por ser herencia que recibió Felipe V de su padre el Delfín de Francia*<sup>2118</sup>. No cabe duda en la lectura de esta carta se está definiendo el carácter privado de las colecciones reales expuestas en el Museo del Prado. Incluso se llegó a insinuar en boca de la Junta del Museo de Ciencias Naturales que la reina no podía disponer de las alhajas en exclusiva, ya que al morir su propietario, Carlos III, en 1788, no se mencionaba en su testamento sobre estos bienes, por lo que se planteaba que los legítimos herederos eran todos los herederos del monarca, por lo que era un error considerar como única propietaria a la reina Isabel, por lo que el Gabinete de Ciencias Naturales no podía devolverlo<sup>2119</sup>. La polémica acabaría cuando la reina dictó la Real Orden del 11 de mayo de 1839, por el que las alhajas del Delfín pasarían al Museo del Prado, pero con una particularidad jurídica que debemos tener en cuenta: las alhajas solo estaban cedidas en depósito, por lo

<sup>2117</sup> LOPEZ RODO,

<sup>2118</sup> ALCOLEA BLANCH, Santiago, *Museo del Prado*, Barcelona, 1991, p.22.

<sup>2119</sup> ARBETETA MIRA, Letizia, 2001, pp.32-33.



que seguirían siendo de propiedad real. Una **Real orden de 26 de noviembre de 1836** dispondría que la Biblioteca Real fuera desvinculada de la Mayordomía Mayor de la Real Casa y pasaba a depender del Ministerio de Gobernación de la Península, denominándose a partir de entonces Biblioteca Nacional<sup>2120</sup>. Según Manuel Carrión *de acuerdo con la idea liberal romántica la Biblioteca Nacional se convertiría en espejo de un pueblo y la búsqueda de las propias raíces de identidad nacional*<sup>2121</sup>.

#### **4. La incorporación del derecho absoluto de la propiedad privada como fundamento jurídico en la construcción del derecho del patrimonio monumental de la etapa inicial del liberalismo español.**

##### **4.1. Un ensayo frustrado de la construcción del Patrimonio arqueológico como bien de dominio público.**

Durante la configuración inicial del Estado Liberal no encontramos grandes novedades en el ámbito de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico, a falta de una regulación normativa que pudiera solventar las cuestiones jurídicas que encerraba la propiedad de los bienes descubiertos en fundos privados, y de una verdadera institucionalización administrativa de tutela del Patrimonio Arqueológico, que pudiera aplicar las disposiciones normativas que en torno a la Real Academia de la Historia se fueron promulgando, heredando de este modo el marco normativo propio de la Ilustración española, concretamente la Real Cédula de 1803.

##### **4.1.1. Un precedente de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico: El Decreto del 6 de febrero de 1810 para la ciudad de Itálica.**

Sería a principio del siglo XIX cuando aparece un personaje emblemático en tierras andaluzas, el viajero francés Alexandre Laborde, quien después de hacer un amplio recorrido por Andalucía, y concretamente por tierras sevillanas, dejó constancia de su estancia con la publicación ya en 1812 de *Voyage pittoresque et historique de l'Espagne*, donde aparecieron unas importantes ilustraciones donde se daban a conocer una serie de vistas de Sevilla y de Itálica, como su anfiteatro y algunos de sus mosaicos, que abrirían el camino al gusto por lo andaluz en el ámbito extranjero, más todavía con el ojo de un romántico que de un ilustrado, y a la vez dejaba constancia de la riqueza patrimonial que poseía la ciudad y sus alrededores. Sin embargo,

---

<sup>2120</sup> FERNANDEZ-BAJON, M<sup>a</sup> Teresa “Disposiciones legislativas sobre política de archivos y bibliotecas en la España del siglo XIX”, *Documentación de la Ciencia de la Información*, núm.24, Madrid, 2001, p.70.

<sup>2121</sup> CARRION GÚTIEZ, Manuel “La B.N. hacia el año 2000”, *Boletín de la ANABAD*, Vol. XXXVI, núm.1-2 (enero-junio, 1986), pp.143-166, p.144.

anteriormente, gracias al apoyo de José Bonaparte, Laborde publicaría una edición en 1809, en París, con el título *Itinéraire Descriptif de l'Espagne*. El interés por el patrimonio artístico de José I no dejaría duda en el caso de Itálica, al promulgar una serie de medidas proteccionistas para evitar su demolición, probablemente la primera medida legal que podemos apreciar en la historia del derecho local en el ámbito de la protección histórico-artística. Sin duda alguna, llevado por el espíritu que se estaba implantando en toda Europa, de proteger algunos yacimientos arqueológicos, promulgaría el Decreto de 8 de febrero de 1810. El Decreto estaría estructurado en cuatro artículos, donde ya encontramos algunas cuestiones jurídicas que ya perfilamos como antecedentes de la legislación liberal. El primer artículo recupera el término de Itálica para el yacimiento arqueológico, probablemente perdido por haber sido confinado en una propiedad privada, con lo que se intenta publicar el antiguo espacio urbano romano. El hecho de proveer con un fondo económico, cincuenta mil reales, de los fondos de San Isidoro del Campo se confirma como una medida desamortizadora en (art.2). Se nombraría una comisión de tres individuos que cuidaría del fondo económico y del buen estado de la renta (art.3). Cabe mencionar como la administración tutelar del yacimiento serían bajo el Ministro del Interior y el Ministro de Hacienda, diversificando la actuación administrativa.

Tres días después desde el Alcázar de Sevilla, se promulgaría el Decreto de 11 de febrero de 1810, por el que Curiosamente, unos días después, el 20 de febrero de 1810, el monarca visitaría Itálica, siendo recogida la noticia en la Gaceta de Madrid, en los siguientes términos: *A medio día S.M. montó a caballo, y pasó a reconocer las ruinas de la antigua Itálica, célebre por haber nacido en ella grandes emperadores y otros varones ilustres, y que aún merecen la atención de los literatos por su circo, mosaicos, y otras ruinas que indican su antigua opulencia y esplendor.* Se desconoce la materialización de estas medidas desamortizadoras, aunque el cronista A.Gali Lassaletta hizo algunas referencias sobre excavaciones emprendidas por el Mariscal Soult en este momento<sup>2122</sup>. Se trata del primer proyecto de intervención administrativa de carácter estatal sobre una propiedad privada, en este caso las ruinas de Itálica pertenecientes al monasterio de San Isidoro del Campo.

#### **4.1.2. La impronta del derecho de la propiedad privada del ordenamiento liberal en la tutela pública del Patrimonio Arqueológico durante el reinado de Fernando VII.**

<sup>2122</sup>Las continuas revueltas bélicas entre franceses, españoles e ingleses, hicieron fracasar este atinado decreto, sumiéndolo en la oscuridad más completa, y nuestra Itálica en el más grande abandono. Sin embargo, el mariscal Soult no se durmió en las pajas, e hizo algunas excavaciones, que dieron por resultado sacar algunos objetos que trasladó a Francia, en compañía de las preseas del arte sevillano que nos arrebató. Tampoco los ingleses anduvieron reacios, pues Wellington, después que con nuestra ayuda consiguió expulsar a los hijos de San Luis, se dedicó a merodear por los contornos de Santiponce, llevándose, cuando su retirada, muchos objetos a Inglaterra.

#### **4.1.2.1. Arqueología científica y expolio arqueológico como práctica habitual en la España de Fernando VII.**

La Arqueología durante el reinado de Fernando VII constituyó una época realmente atractiva de nuestra Historia y en general de la de Europa<sup>2123</sup>. Como prueba del reconocimiento público que estaba teniendo se incluiría en esta etapa, su enseñanza en la Escuela Superior de Diplomática, que había sido creada en 1856 por iniciativa de la Real Academia de la Historia<sup>2124</sup>. En el Informe que presentaría Castellanos de Losada el 9 de junio de 1839 a la Real Academia de la Historia se delimita la concepción que en este momento se tenía sobre la Arqueología en España: La arqueología tiene como objeto principal dar a conocer las costumbres y usos civiles y religiosos de los antiguos en su vida pública y privada por el estudio de monumentos, y describir y apreciar el mérito artístico de los mismos como aplicación al fin que se propone (...) En España no ha sido desconocido este estudio, al contrario muy temprano, y quizás antes que en otras naciones (...) Sin embargo, debe confesarse en honor de la verdad que aunque los españoles se ocuparon en ilustrar varios objetos de los que comprende la arqueología, no fue tratada por ellos esta ciencia como un conjunto de doctrina en toda su extensión (...) <sup>2125</sup>.

Al mismo tiempo que se estaba produciendo un reconocimiento científico de la Arqueología en España, los expolios arqueológicos estuvieron a la hora del día de los grandes yacimientos que con los años se convertirían en verdaderos hitos en el ámbito español. Un ejemplo significativo de esta destrucción del patrimonio arqueológico lo representa en estos años la ciudad de Itálica, especialmente entre 1825 y 1827, como así apunta Reyes Velázquez en su trabajo publicado en 1918. Comienza en este momento las adquisiciones de piezas romanas por coleccionistas extranjeros, como fue el caso de Nathan Wetherell, que desde su llegada a Sevilla en 1810, poseía una industria de curtidos cerca de la Fábrica de Tabacos, y comenzó a hacer excavaciones hacia 1820 en Itálica, quien al cabo de los años algunas de sus piezas encontradas, diez epígrafes, serían adquiridas a finales del siglo XIX por el Museo Británico al vendérsela su hijo Horace Wetherell. Matutes en sus *Bosquejos de Itálica* ya menciona algunas adquisiciones en el solar itálico, como el epígrafe funerario que sería adquirido en 1815 por el conde de Casa Rojas, que lo llevaría después a su casa de Madrid, o los encontrados por el licenciado Francisco Javier Delgado, para trasladarlo posteriormente a Bollullos. El gran número de piezas arqueológicas romanas expoliadas de Itálica por un comercio fraudulento que no tenía límite hizo que en 1827 Justino Matute y Gavira en su obra *Bosquejos*

---

<sup>2123</sup> MAIER ALLENDE, Jorge, “Las Antigüedades en la España de Fernando VII: De la Academia a la Arqueología (1814-1833)” en *Revista de Historiografía*, 5, III, febrero, 2006, p.99.

<sup>2124</sup> MAIER ALLENDE, Jorge “La enseñanza de la Arqueología y sus maestros en la Escuela Superior de Diplomática”, *Revista General de Información y Documentación*, 2008, pp.173-189.

<sup>2125</sup> El texto aparece reproducido en MAIER, Jorge, 2008, pp.176-177.

de Itálica propusiera que los Ayuntamientos deberían recoger las antigüedades para que se fueran recogiendo en los museos locales o provinciales que debían de fundarse: *Ya que la ocasión lo ofrece no dejaré pasar sin decir, que así como por la ley está prohibido, a favor de las artes, que se extraigan del reino pinturas originales de autores célebres; sería bien que hubiese otra que mandase, que todas estas antigüedades se recogiesen en las casas consistoriales de los pueblos, en cuya jurisdicción se encontrase, formando inventario de todas ellas, ó bien que se trasladasen á la ciudad capital, donde sus Ayuntamiento las mandase colocar en lugar resguardado, formase inventario de todas ellas con su procedencia, y custodiase como los monumentos más genuinos de nuestra historia*<sup>2126</sup>. Esta idea se va a convertir en algo común en el ámbito de la erudición del siglo XIX, especialmente en autores de prestigio como José Amador de los Ríos y su hermano Demetrio de los Ríos.

#### **4.1.2.2. La vigencia de la Real Cédula de 1803: Las Circulares de 2 de octubre de 1818 y 19 de septiembre de 1827.**

Durante el periodo fernandino no se va a promulgar una nueva ley de protección monumental como, sino que por el contrario va a quedar vigente la Instrucción de Monumentos de 1803, promulgada por Carlos IV. No cabe duda que una de las aportaciones más importantes de la etapa fernandina fue la configuración de una incipiente Administración Pública del Patrimonio Monumental, especialmente en el periodo de la Década Ominosa, un hecho no aislado en un contexto de reforma institucional, donde se acentúa el papel de los Secretarios de Estado y el repliegue de los Consejos<sup>2127</sup>. En el ámbito de la arqueología, la Real Academia de la Historia se convierte en la primera institución en que el monarca dispense en todo momento su apoyo, especialmente al reforzar y consolidar su posición a través de las dos circulares de 1818 y 1827. Después de los años convulsivos de los primeros años del reinado de Fernando, en la etapa del sexenio absolutista, siguiendo a Maier la Real Academia de la Historia *fue poco a poco restableciendo la normalidad en la vida académica y las juntas se celebran con la regularidad tradicional a pesar del reducido número de académicos ya que algunos de ellos fueron dados de baja por motivos políticos. A pesar de todo, Fernando VII dispensó un decisivo apoyo a la Real Academia de la Historia*<sup>2128</sup>. La Sala de Antigüedades gozaría de una importante actividad, especialmente en lo relativo a la Inspección de Antigüedades. Durante el periodo del Trienio Constitucional, la Real Academia de la Historia

<sup>2126</sup> MATUTE Y GAVIRA, Justino *Bosquejo de Itálica o apuntes que juntaba para su historia*, Sevilla, 1827. Reimpresión, Portada Editorial, Sevilla, 1994.

<sup>2127</sup> Sobre la reforma de la administración en la etapa de la Década Ominosa, SUAREZ, Federico, Nota sobre la administración en el reinado de Fernando VII en *Actas del Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1970, pp.452-460; FONTES MIGALLON, F. "El consejo de Ministros en el reinado de Fernando VII", *Revista de Derecho de la Universidad Complutense*, 71, 1986, pp. 309-373.

<sup>2128</sup> MAIER, 2006, p.102. El apoyo real se puede apreciar en el Oficio que se inserta en el acta de la junta de 8 de marzo de 1816, concediéndole una pensión anual de cien mil reales. La Real Academia de la Historia reemprendería durante la Década Ominosa la inspección de los grandes centros arqueológicos como es el caso de Itálica, Mérida, Segóbriga y Tarragona.

pasó a depender del Ministerio de la Gobernación de la Península<sup>2129</sup>. Los asuntos de Antigüedades se tramitaban a través de la Primera Secretaría de Estado, que era la que dependía la corporación como queda reglamentado en la Novísima Recopilación, hasta 1832 que se crearía el Ministerio del Fomento General del Reino<sup>2130</sup>. La Secretaría de Estado o el Ministerio de Fomento, bien se tratara de notificaciones de hallazgos o de la protección y conservación de los monumentos determinados en la Real Cédula, lo ponía en conocimiento de la Academia para que emitiera el informe correspondiente y se tomara ante su vista la resolución más conveniente. Los descubridores o informantes y las autoridades civiles y eclesiásticas también podían dirigirse directamente al Secretario de la Real Academia de la Historia como se reglamenta en la Real Cédula. Tanto en uno como en otro itinerario el Secretario lo ponía en conocimiento de la corporación la cual, normalmente, por indicación del Director, la traslada a la Sala o Comisión de Antigüedades para que emitiera el informe correspondiente. Ante la vista de dicho Informe, que era presentado en junta académica por el Revisor o el Secretario de la Sala de Antigüedades, se tomaba la resolución conveniente la cual se comunicaba, o bien al Gobierno si se había solicitado de Real Orden, o bien a los interesados<sup>2131</sup>. Una serie de disposiciones van ir gestando el marco institucional administrativo del Patrimonio Arqueológico:

- La circular de 2 de octubre de 1808, por lo que se le iba a dar un papel predominante a los Justicias de los Pueblos, a raíz de los expolios ocurridos en el pueblo de Saelices.
- *El nombramiento del Asistente de Sevilla como Protector de las Artes de la ciudad de Itálica: Circular del Consejo de Castilla de 29 de abril 1827.*
- *La Circular de 19 de septiembre de 1827 incluyendo una Real Orden en que se mandase nuevamente conservar los restos y vestigios de antigüedades, dándole la prioridad a la Real Academia de la Historia en la inspección de antigüedades.*

La primera Circular data del **2 de octubre de 1818** y surgiría a raíz del expolio llevado a cabo en la basílica visigoda por los vecinos de la localidad aparece relatado en el Informe que envía a la Real Academia de la Historia en 5 de enero de 1817, el propio Alcalde de Saelices, Juan Plácido Martínez

---

<sup>2129</sup> MAIER, 2006, p.105. Según Maier *durante el Trienio Constitucional la actividad de la Academia de la Historia es menor, siendo las noticias sobre las antigüedades son muy escasas. Fue el Trienio una época significativa en cuanto que constituye una antesala de lo porvenir en materia de protección del patrimonio cultural español y de las responsabilidades y atribuciones que la Real Academia de la Historia tuvo para desarrollar los mecanismos para su más eficaz conservación y difusión a la sociedad.*

<sup>2130</sup> A raíz del decreto del 9 de noviembre de 1832 se crea el Ministerio de Fomento MOLAS RIBALTA, Pere De la Junta de Comercio al Ministerio de Fomento, *Actas del IV Symposium de historia de la Administración* Madrid, 1983, pp.529-556.

<sup>2131</sup> MAIER, Las Antigüedades en la España de Fernando VII: De la Academia a la Arqueología (1814-1833) en *Revista de Historiografía*, 5, III, febrero, 2006, p.99.



Falero, Alcalde de Saelices: *cuenta uno de los guardas como había bastantes hombres destruyendo un monumento tan precioso digno de en mejor custodia y habiendo pasado inmediatamente a contener tales excesos como Juez que me hallo, encontré diferentes vecinos con picos y aradones sacando algunas lapidas y ladrillos, por lo que ordenó el traslado de diversas antigüedades al Ayuntamiento. Al mismo solicitaría que me envíe una Real Orden haciendo responsables a los justicias y ayuntamientos de semejantes sucesos, pues esto ha sido la causa de que algunos vecinos se hallan propasado hacer semejante atentados, que se coloque en el ayuntamiento para que no se alegue ignorancia en un asunto en que se interesa el mejor servicio a S.R.M. y la conservación de unas preciosidades dignas de la mayor atención.* Diego Clemencín, académico de la Historia, le remite el 31 de enero de 1817 una copia de ley en la que le confería a la Real Academia de la Historia la inspección de todos los monumentos de la antigüedad en la Península, al mismo tiempo que se le encargaba a los Justicias de los Pueblos su protección, para que procediera contra los vecinos que habían expoliado el monumento: *se debe de tener presente de que está dispuesto en la Novísima Recopilación de las leyes del Reino, libro 8, título 20, ley 3ª, donde se confiere a esta Real Academia la inspección de todos los monumentos de antigüedad existente en la Península. Allí puede V. ver la instrucción que se da sobre la materia y señaladamente su artículo 7º donde se encarga a los Justicias de todos los Pueblos que cuiden de que nadie dañe ni maltrate los monumentos descubiertos o que se descubrieran, puesto que tanto interesan al honor, antigüedad y nombre de los pueblos mismos, tomando las providencias convenientes para que así se verifiquen.* En la Minuta de Oficio de 6 de junio de 1818 se informaba que Segobriga al seguir igual la situación de expolio, la Academia había acordado acudir al Gobierno para que tomase las medidas oportunas con el fin de evitar el expolio de los monumentos de Cabeza de Griego. Al mismo tiempo se enviaría al Secretario de Estado un oficio exponiendo la necesidad de tomar las medidas necesarias para evitar el expolio de las antigüedades de Cabeza del Griego, ya que todas las acciones del Ayuntamiento de Salices y de la propia Academia habían resultado en vano: *La Academia deseando contener estos males, y después de haber hecho lo que era de su parte para conseguirlo, ha creído en su obligación ponerlo todo con noticia a V.E. Sería digno a la augusta protección que el Reino disponga a cuanto contribuya a la gloria y esplendor de la nación.* La Real Orden se transmitiría al Consejo de Castilla, por el que mandó expedir una circular el 2 de octubre de 1818 que sería remitida a los Justicias para su cumplimiento. Al mismo tiempo, Cean Bermúdez propondría en la junta académica del 30 de octubre de 1818 que se remitiese dicha circular a todos los correspondientes de las provincias españolas. Como apunta Maier, *esta medida contribuyó, sin duda, a restablecer la inspección de antigüedades, y sobre todo, a consolidar las medidas legislativas sobre nuestro Patrimonio Monumental, además de que se comprometía a los académicos correspondientes, como representantes de la Academias en las provincias, para poder emprender las diligencias correspondientes para la conservación de los monumentos (...)*<sup>2132</sup> A pesar de que hubo un restablecimiento

<sup>2132</sup> MAIER, J., 2003, p.459.



de las actividades de la Sala de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, la Guerra Constitucional daría al traste con la aplicación de esta disposición. Ya en 1837 se volvería a promulgar la Real Cédula del 28 de abril, con resultados similares.

Los Justicias de los Pueblos van a adquirir un papel predominante a nivel local en el ámbito de la Protección Monumental. Los Justicias Reales desempeñaron un papel importante en el ámbito de la protección patrimonial en los años de la Ilustración., que ya había sido reflejado en la propia Cédula de 1803. Por fin se transmitiría una circular, con fecha de **2 de octubre de 1818**, por la que se mandaba a los Justicias observar y cumplir la Real Cédula de 1803: se encargaría á los Justicias de todos los pueblos en cumplimiento de la ley inserta, que nadie destruya ni maltrate los edificios y monumentos de antigüedad que hubiere descubiertos ó que se descubran, puesto que al honor y nombre de los pueblos mismos tanto interesa su conservación<sup>2133</sup>. Se establecía a su vez que se expida la correspondiente circular á la Sala de Alcaldes de la Real Casa y Corte, Chancillerías y Audiencias Reales, Corregidores, Gobernadores, Alcaldes Mayores y demás justicias del reino, á fin de que dispongan lo conveniente á su puntual observancia. Al mismo tiempo, Cean Bermúdez propondría en la junta académica del 30 de octubre de 1818 que se remitiese dicha circular a todos los correspondientes de las provincias españolas. Como apunta Maier, *esta medida contribuyó, sin duda, a restablecer la inspección de antigüedades, y sobre todo, a consolidar las medidas legislativas sobre nuestro Patrimonio Monumental, además de que se comprometía a los académicos correspondientes, como representantes de la Academias en las provincias, para poder emprender las diligencias correspondientes para la conservación de los monumentos (...)*<sup>2134</sup> A pesar de que hubo un restablecimiento de las actividades de la Sala de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, la Guerra Constitucional daría al traste con la aplicación de esta disposición.

Durante la segunda etapa absolutista del reinado de Fernando VII se va a asistir a una amplia reforma administrativa del Estado, que va a tener su impronta en la tutela pública del Patrimonio Arqueológico. La Real Academia de la Historia va a mostrar una gran preocupación por la conservación de las ruinas de Itálica para lo que comisionó a Ciriaco González de Carvajal, Magistrado y miembro de la Academia sevillana de Buenas Letras, *para que conforme a las leyes de la materia cuide que no se extravíen, ni padezcan menoscabos las antigüedades que se encuentren en Sevilla y sus alrededores*. A la hora de desarrollar su comisión se encontraría con un obstáculo institucional, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, al haber habilitado al arquitecto Cayetano Vález para que se encargase de la conservación del

---

<sup>2133</sup> CEBRIAN FERNANDEZ, Rosario *Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, 1748-1845, Catálogo e Índices*, Alicante, 2002. Real Academia de la Historia, pp.16-17.

<sup>2134</sup> MAIER, J., 2003, p.459.

yacimiento. El choque institucional de funciones entre ambas Academias daría lugar a un dictamen jurídico, por lo que aplicándose lo que se había dispuesto en la Real Cédula de 1803, se mantenía que la única institución con competencia para intervenir en Itálica sería la Academia de la Historia, y que debía de exhortarse a los monjes jerónimos *por medio de su General, a que cuidasen de todo aquel suelo, bajo la dirección de un Académico*. La controversia quedaría en principio resuelta al proponer el Secretario de Estado, Manuel González Salmón, a través de la **Circular del 29 de abril de 1827**, entre las muchas medidas de conservación del yacimiento de Itálica, el nombramiento del Asistente de Sevilla, como protector de los monumentos de la ciudad y los contornos, que constituye un verdadero antecedente de la política de protección monumental más tarde el Estado Liberal desarrollaría<sup>2135</sup>, y al mismo tiempo mandar que la Real Academia de la Historia informase y propusiese *lo que creyese más conveniente por punto general para la conservación de los monumentos de antigüedad que habían esparcidos en las diferentes Provincias del Reino, y los medios oportunos, no solo para impedir su total destrucción, sino para restaurarlos y conservarlos en el mejor estado posible*, a lo que informaron que *poco o nada podía añadirse a las disposiciones gubernativas vigentes sobre la materia, y que la perseverancia en hacerlas ejecutar puntualmente, junto con las muestras de protección y de aprecio que se dispensasen oportunamente a este ramo, honrando a los Magistrados que se distinguiesen en su observancia, era cuanto ahora había por ahora que hacer en tan importante negocio*. Sería nombrado una comisión formada por José Sabau, Antonio Siles y Diego Clemencín, en la que notificó que debía ser observada las leyes vigentes, como así consta en la **Minuta de oficio del 29 de mayo de 1827** del Archivo de la Real Academia de la Historia): *Entiende la Academia que las disposiciones gubernativas vigentes en la actualidad sobre la materia y que la perseverancia en ha<sup>o</sup>cerlas ejecutar con puntualidad, junto con las muestras de protección y de aprecio que se dispensen oportunamente a este ramo, fomentando a los magistrados que se distingan en su observancia, es cuanto hay por ahora que hacer en este importante negocio*, por lo que el Rey mandó al Consejo de Castilla por **Real Orden de 18 de agosto de 1827**, que se promulgara una nueva disposición, como así se hizo el **19 de septiembre** de este mismo año en el que dispondría que *se renovasen las órdenes y circulares anteriores expedidas sobre la materia, recomendándose su más puntual observancia muy particularmente a todos aquellos a quienes compitiese, manifestándoles que así como serían apreciados y distinguidos oportunamente lo que se esmerasen en acreditar su vigilancia en la materia, incurrirán por el contrario en el real desagrado, y aun se procedería severamente contra los mirasen con incuria y descuido la conservación de tan preciosos vestigios de la antigüedad*<sup>2136</sup>. La aplicación de la Circular del Consejo de 19 de septiembre de 1827 sería cumplida en algunos casos por algún alcalde de pueblos rurales, como así

<sup>2135</sup> LEON, Pilar “Las ruinas de Itálica: una estampa arqueológica de prestigio”, en BELTRAN, J. y GASCÓ F. (eds.), *La Antigüedad como argumento: historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía*, 1993, p.39.

<sup>2136</sup> MAIER ALLENDE, Jorge *Noticias de antigüedades de las Actas de Sesiones de la Real Academia de la Historia (1792-1833)*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2003, p.38.

aparece notificado en la **Minuta de Oficio de 15 de agosto de 1829** en el que la Real Academia de la Historia agradece la colaboración del Alcalde de Trigueros en la aplicación de las disposiciones vigentes en la tutela pública de las Antigüedades: *La Academia ha recibido con su mayor aprecio (...) elogiando en particular su celo por la conservación de las antigüedades y observancia de las leyes que rigen en la materia.*

Ya en los últimos años del reinado de Fernando VII se comenzarían a introducir tímidamente diversas modificaciones en la estructura administrativa del Estado por lo que por las **Reales Ordenes de 5 y 9 noviembre de 1832**, la Real Academia de la Historia pasó a depender del nuevo Ministerio de Fomento General del Reino, que marcaría el camino de transición del sistema de gobierno de Antiguo Régimen hacia el institucionalismo contemporáneo<sup>2137</sup>. A la hora de ejercer su papel de inspección, la Academia se encontrará con grandes dificultades, como así lo demuestra el hecho de las quejas recogidas en su Memoria de 1819, especialmente por el poco auxilio que encuentra en las autoridades municipales, *que no alcanzan a entender lo que la conservación de los restos de la venerable antigüedad contribuye al honor y buen nombre de los pueblos que los conserva.*

#### **4.1.2.3. Un proyecto frustrado: la fundación de un Museo de Antigüedades por la Real Academia de la Historia.**

Uno de los proyectos más importante del periodo fernandino fue sin duda el proyecto de fundar un *Museo Español de Antigüedades*, que constituiría el precedente de la creación del Museo Arqueológico Nacional<sup>2138</sup>. La idea partió de tres figuras excepcionales en la década de los treinta: José Musso, José Gómez de la Cortina, ambos miembros de la Academia de la Historia y Antonio Montenegro, quienes expusieron *que sería conveniente formar un Museo de Antigüedades en que además de recoger y coordinarse las preciosidades que ya posee en diversos parages y adquiriese en lo sucesivo S.M. se formase una biblioteca escogida del mismo asunto, y se estableciesen enseñanzas de geografía antigua, inscripciones, numismática y demás asuntos pertinentes a Antigüedades*, una idea innovadora en el contexto cultural del momento. En el Informe se estaban recogiendo dos concepciones determinantes en el ámbito del coleccionismo español: Su carácter público, al contener su colección, las que perteneciera la

---

<sup>2137</sup> En la etapa de la Década Ominosa (1823-1833), siguiendo a Maier, *nos encontramos ante una etapa que de nuevo se caracteriza por la prolijidad en todas las tareas académicas (...) Esta circunstancia se debe sin duda a un giro político hacia un reformismo moderado que marca una clara diferencia con el Sexenio Absolutista. Se produce, pues, en estos últimos años del reinado el verdadero comienzo de la transición entre el Estado del Antiguo Régimen y el Estado Liberal.* MAIER, 2006, p.106.

<sup>2138</sup> ALMAGRO-GORBEA M.; MAIER J. “El futuro desde el pasado: La Real Academia de la Historia y el origen y funciones del Museo Arqueológico Nacional”. *Boletín de la Real Academia de la Historia*, CXCVI, pp.183-207; MARTINEZ RODRIGUEZ, Andrés “José Musso Valiente y la creación de un museo de antigüedades”, en *Actas del Congreso Internacional sobre José Musso Valiente y su época (1785-1838): la transición del Neoclasicismo al Romanticismo* celebrado entre el 17 y 19 de noviembre de 2004. Vol.1. 2006pp.111-120.

Academia, y la colección privada de Antigüedades de la Corona, y su carácter nacional, no en clave política, sino con el objetivo primordial de dar a conocer a la cultura española entre los ciudadanos<sup>2139</sup>. El 15 de enero de 1830 el Secretario Estado de Fernando VII, Manuel González Salmón, remite de Real Orden a la Academia sobre el proyecto presentado por los citados académicos. En la contestación llevada a cabo por el Secretario de la Real Academia de la Historia, Diego Clemencín del 6 de marzo de 1830 al Secretario Real, Manuel González Salmón deja constancia de su verdadera intención: 1º) Un interés conservacionista de los bienes expuestos pertenecientes al legado patrimonial, al considerar *quenada hai en concepto en la Academia más digno de la atención de su S.M. que la formación de un Museo, donde se recojan y custodien los monumentos de la venerable Antigüedad, preservándolos de las injurias del tiempo, del descuido y de la ignorancia;* 2º) Dar a conocer la cultura española, como instrumento vital de representación en el ámbito cortesano, ya que sería *uno de los adornos de la Corte, en que los extrangeros que lo visitasen verían las muestras de la cultura de la Nación y de la sabiduría de su Gobierno,* y para el público nacional en general, ya que *tendría a la vista una colección de objetos dignos de su curiosidad y estudio,* con una intención claramente educacional, *promoviéndose de esta suerte la afición a esta clase de conocimientos que florecen en los demás pueblos de España y señaladamente en Italia. Sería todavía más recomendable este Museo, se le agregase una biblioteca completa de este ramo, en que las personas aficionadas pudiesen hallar los muchos, raros y costoso libros que traten de la materia (...)* Y si se añadiesen escuelas en que se enseñasen metódicamente los conocimientos relativos a las Antigüedades entonces nada habría que desear para la perfección de su establecimiento tan útil y aún tan necesario ya en el estado actual de la ilustración europea. A pesar de que la Real Academia acogiera la idea con optimismo, la situación económica del Reino dejó en suspenso el proyecto, aunque seguiría con ello hasta su creación definitiva del Museo arqueológico Nacional en 1867<sup>2140</sup>.

#### **4.1.3. Una frustrada tutela pública del Patrimonio Monumental Privado en base al respeto absoluto del derecho de la propiedad durante la etapa de las Regencias.**

##### **4.1.3.1. Los límites del derecho de la propiedad privada en la construcción del Derecho Público del Patrimonio Arqueológico.**

No cabe duda que las excavaciones arqueológicas se incrementaron considerablemente en los años de las Regencias, en un momento en que la búsqueda de las antigüedades se había convertido en un objeto primordial de muchos investigadores, eruditos y académicos de la historia primordialmente, a lo que se unió la iniciativa estatal que veía en las antigüedades una referencia esencial en la reconstrucción de la historia nacional. El conflicto jurídico estaba servido, y se iría a prolongar durante toda la etapa isabelina, especialmente por la peculiar localización de los bienes arqueológicos, ya que un gran número de

<sup>2139</sup> MAIER, J., 2003, p.34.

<sup>2140</sup> MAIER, J., 2003, p.35.

ellos se encontraban situados en los fundos privados, por lo que surgía el problema primordial a la hora de su tutela pública, su régimen patrimonial, al considerarse dueño de los mismos, el propietario del lugar donde se habían encontrado, o del propio descubridor. Había nacido un Patrimonio Especial, que aunque identificado como una rama de la historia del Arte, se iría abriendo el camino de desarrollar un régimen jurídico específico, distinto al utilizado en el caso del resto de las obras artísticas. En esta etapa, la vigencia de la Cédula de 1803 sigue estando presente, por lo que en el caso de que hubieran sido descubiertos en una propiedad privada, pasaban a manos ajena a lo público, bien a su descubridor, bien al propietario del fundo donde se había encontrado, por lo que el Estado apenas podía intervenir sobre ellos, salvo la de adquirirlos a cambio de una indemnización, pero siempre con la libertad de venderlos el propietario. La cuestión cambiaría si el terreno en cuestión fuera público o de la Corona, como se disponía en el artículo 2º de la Real Cédula.

***- La denegación de adquisición de bienes arqueológicos de dominio público por un particular: La Academia de la Historia desestima la pretensión de excavación arqueológica de Domingo Ranchi.***

Las excavaciones arqueológicas van a adquirir un rasgo oficial, al tener que ser autorizadas por los gobernadores civiles, aunque debía ser consultado su nombramiento a la Real Academia de la Historia, que suscito amplios conflictos de jurisdicción en la tutela patrimonial. Se conocen intentos de particulares por adquirir derechos patrimoniales sobre los bienes que en principio por su naturaleza tenían que pertenecer al Estado. En este punto cabe mencionar la solicitud de autorización que pidió Domingo Rocchi del Consejo de Su Majestad el 11 de marzo de 1839 para iniciar excavaciones en Itálica, concediéndole facultad para vender en el extranjero parte de los monumentos de antigüedad que se encuentren, con el pretexto de que al estar viviendo el Estado una situación de crisis política, se podía hacer un servicio público protegiendo las ruinas de Itálica: *El Gobierno en medio de su actual apuro no puede destinar a tan importante i costosa operación los fondos que son necesarios. Si un particular celoso pudiera llevarla a cabo con su propio capital, cediendo al erario una parte del valor de su descubrimiento, no cabe duda que S. M. se dignaría acoger su benevolencia, sus patrióticos deseos i concederles los auxilios que reclama para su empresa en el concepto de que ningún gravamen ha de imponer a los fondos públicos* Con este objetivo se planteaba una serie de condiciones que con el tiempo se va a intentar plantear posteriormente en la España isabelina.

La primera concesión estaría referida al uso ilimitado de la delimitación del terreno donde debía de practicar las diversas excavaciones arqueológicas: *Se concederá al esponente bajo su propio nombre la facultad exclusiva de utilizar lo que se encuentran entre las ruinas de la antigua Itálica en toda la estension que se considere haber ocupado la ciudad i de hacer las catas i escavaciones que se juzguen necesarias para el hallazgo de antigüedades, sin que corporación ni persona alguna pueda perturbarle en su trabajo (...).* Se planteaba el uso de una mano de obra



procedente de las prisiones locales que estaban trabajando en obras públicas en este momento, a cambio de un montante económico y respetar las condiciones humanitarias: *Para los trabajos expresados se facilitará al esponente hasta quinientos confinados a medida que lo solicite, i la cuota correspondiente a numero, abonando un plus de medio real diario, i tratarlo con la consideraciones debidas a la humanidad.* Como tercera condición, se establecía que todos los objetos encontrados fueran adquiridos en propiedad, *pudiendo disponer de ellos según su voluntad, u espedirlos al extranjero.* Incluso se contemplaba que *los objetos que se vendan o se despachen para el extranjero desgravarán un veinte i seis por ciento de su valor en venta con tasación hecha por peritos nombrados por ambas partes, aunque dejaba a elección del Gobierno cuales eran los objetos con destinos a los Museos academias u otros establecimientos públicos, i los tomará por un valor en tasación de los derechos expresados en el artículo anterior, i habiendo ascenso por una ú otra parte se hará recíprocamente el abono.* La Real Academia de la Historia informaría en contra para que no se permitiera a Domingo Rochi la venta en el extranjero de los objetos de antigüedad que extrajese de Itálica, en el caso de que se le diese permiso para realizar excavaciones, poniendo como excusa que la legislación que se había promulgado desde Carlos III hasta este momento, por la que no se permitía la salida de obras de arte al extranjero: *Pero a pesar de la situación lastimosa de nuestros días, cree la Academia que sería deshonoroso permitir que se pusiesen a la venta los restos preciosos que quedan de los siglos pasados, y que por fortuna han resistido á los enbites del tiempo (...). Aun cuando D. Domingo Ranchi quisiera hacer descubrimientos á su costa y formar un museo para instrucción de los anticuarios españoles, (...) manifiesta como principal objeto sacar fuera del país los fragmentos y reliquias de aquella célebre ciudad, i quiere no ser lo opuesto de semejante demanda con lo que con tanto acierto ordenaron los Sres. Reyes D. Carlos IV y Sr. Fernando VII.* En el Informe de la Real Academia de la Historia se le incitaba al Gobierno la obligación que debía de adquirir a la hora de realizar excavaciones arqueológicas: *Personándose el Gobierno de que a nadie mejor que hacer que á él toca hacer excavaciones y formar un museo de antigüedades de un modo correspondiente a la dignidad de la Nación (...) le incumbe la obligación de mandar que nadie penetre en ellas excepto las personas instruidas a quienes mueva el amor a las ciencias y a las artes, poner guardianes que impidan toda extracción y en fin encargar a las autoridades el cumplimiento de lo que tantas veces se ha prevenido en esta materia. Este ha sido el clamor constante de la Academia desde que se les encomendó por S.M. la inspección de todas las antigüedades del Reino.*

**- La autorización de excavaciones arqueológicas a los particulares en dominio público.**

Al contrario que en el caso de Rochi, algunos eruditos particulares fueron autorizados para poder realizar excavaciones arqueológicas, como fue el caso de José Cassano en Complutum, cerca de Alcalá de Henares. De esta manera se solicitaría informe de la Real Academia de la Historia mediante **Real decreto de 19 de agosto de 1831**, contentando favorablemente el 27 de agosto del mismo año siempre *que fuera de su cuenta todos los gastos que*



*originase, sin gravar en nada al Real Erario, y sujetándose en un todo a las leyes y disposiciones que rigen, por lo que no hay inconveniente en que se le conceda el permiso, en los términos que propone, previniéndose en el mismo permiso a los justicias y autoridades locales que en el caso de que se descubriera algunas antigüedades, tengan presente y hagan observar lo que se dispone en la Novísima Recopilación de las leyes del Reino y circulares del Consejo sobre la materia.* (CAM/9/7961/008(3). Archivo de la Real Academia de la Historia). Del mismo modo también se conocen algunos eruditos que colaboraron con la Administración Pública a la hora de descubrir bienes arqueológicos, cuya labor le era reconocida, como ocurrió en el descubrimiento de unas antigüedades descubiertas en el Cortijo de las Vírgenes (Baena) en 1834, por lo que promulgó la **Real Orden de 8 de abril**, por lo que la Reina felicitaba a Diego Pineda por el celo con que había recogido los objetos menores descubiertos, los cuales debían ser remitidos a la Academia, y las urnas descubiertas y las que se descubran se depositasen en el Ayuntamiento y que en ocasión de nuevos hallazgos se observe lo que este prevenido en las leyes.

#### **4.1.3.2. Un nuevo ensayo frustrado de la Administración tutelar del Patrimonio Arqueológico.**

*- Los conflictos institucionales en la tutela de yacimientos arqueológicos de dominio público: El proyecto de Ivo de Cartona de Itálica y su confrontación con la Real Academia de la Historia.*

Como ya se había apuntado anteriormente, desde las primeras disposiciones borbónicas el Gobernador Civil asumiría un papel trascendental en la tutela pública del Patrimonio Arqueológico, que en la mayor parte de los casos no cumplía su cometido, bien por inercia, bien por los propios conflictos con los intereses particulares que podían suscitar en su propia localidad. No obstante, existen algunos referentes excepcionales que demuestran que su actuación fue muy perentoria, como se deduce del Informe que da la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del 18 de febrero de 1836, con motivo del descubrimiento de un mosaico en Mérida, elogiando *el ilustrado celo de aquel Gobernador, D. Mariano de Albo, tal vez único en su especie*. Y es que la actitud del gobernador y del propio ayuntamiento, no solamente era algo inusual en la época, va a chocar no solamente con los intereses particulares del propietario (según el Informe de la Academia, el mosaico *se halla en el corral de una casa particular, alcanzándose a otros dos, y prolongándose el terreno por debajo de unas casillas miserables*), sino del propio procedimiento realizado por la propia Administración, especialmente por falta de interés y por carencia económica, por lo que la Academia  *pide al Gobierno que no solo disponga de (...) fondos municipales en la excavación, sino que se le autorice para gastar las que fuera necesarias con el fin de conservar lo descubierto, y cierta cantidad para proseguir las*

*investigaciones y traslado lo que se encuentre a parte segura, donde se forme un museo*<sup>2141</sup>.

En muchas ocasiones la propia actuación del Gobernador Civil inducía a conflictos de competencias con otras instituciones culturales, como fue el caso de la Real Academia de la Historia, al considerar que se limitaba las prerrogativas que habían sido dadas en base a la legislación vigente desde la etapa borbónica. Sería precisamente en la gestión institucional del yacimiento arqueológico de Itálica donde se generaría el conflicto de competencias, suscitando una amplia polémica que saltaría incluso a la opinión pública, e incluso a las propias instituciones locales, como la Academia de Buenas Letras<sup>2142</sup>. En el Oficio de 8 de mayo de 1839 se informaría al Jefe Político de Sevilla de la exposición que la Academia remitió al Ministerio de la Gobernación de la Península acerca de los abusos que se están cometiendo en las excavaciones de Itálica a fin de que aquella autoridad satisfaga con toda urgencia a los cargos que resultan contra la administración, y bajo su más estrecha responsabilidad evite en adelante los excesos que se le indican; ordenándole al mismo tiempo la ejecución de la Disposición de la Ley 3º título 20 libro 8º de la Novísima Recopilación. Por tal motivo, Ivo de la Cortina, oficial la jefatura política de Sevilla, que pide ser nombrado director de las excavaciones de Santiponce, por lo que una Comisión de la Real Academia de la Historia redactaría un Informe que daría público el 18 de octubre de 1839, por lo que en ella no halla inconveniente en que haya un director especial de dichas excavaciones, si el Gobierno por los antecedentes que tenga de su aptitud, le considera capaz de dirigir aquellos trabajos; pero opina al mismo tiempo que el Jefe Político de Sevilla debe de considerarse como protector de los Monumentos de Itálica, no solo por haber sucedido al antiguo Asistente de aquella capital, que lo era por Real Orden de 29 de abril de 1827, sino también en virtud de las facultades que el decreto de instrucción de 30 de noviembre de 1833 conceden á los que en aquella época se denominaron Subdelegados de Fomento, pero dejando claro que tanto las atribuciones de un Director especial como las de Protector en la persona del Jefe Político de Sevilla, han de entenderse sin perjuicio ni menoscabo de la inspección general que sobre los monumentos de Itálica y demás del reino compete á esta Academia por la Real Cédula de 6 de julio de 1803, inserta en la Ley 3º, tit.20, libro 8º de la Novísima Recopilación. Entretanto, el Jefe Político de Sevilla habría paralizado las excavaciones arqueológicas en Itálica como así consta en el Oficio de 1 de septiembre de 1840.

El análisis del Proyecto que propondría Ivo de la Cortina para la realización de excavaciones en Itálica constituye por sí en un verdadero modelo administrativo de tutela pública, que aunque no llegó a ser aceptado

<sup>2141</sup> MAIER, J. 2003, p.120.

<sup>2142</sup> LUZON, J.M., 1999, p.54.

por la Real Academia de la Historia. En el capítulo I ya se abordaría el marco administrativo de la explotación, proponiendo el propio Ivo de la Cortina, la dirección de los trabajos de las excavaciones de Itálica (art.1), por lo que no podría ninguna persona entrometerse en la dirección de los trabajos sin que por esto estuviese facultades especialmente por el Gobierno superior (art.2º). Entre las obligaciones del director de las excavaciones estaría la de vigilar con un asistente los trabajos y subvenir a las dificultades que en estos ocurriesen (art.3º), así como intervenir en las operaciones de los encargados en la recaudación que deberían establecerse dando parte al Jefe Político de la Provincia de las faltas que en aquellas advirtiese (art.4º). El director de las obras remitiría mensualmente al Jefe superior Político de la Provincia y a la Academia Nacional de la Historia, un estado de los objetos extraídos visado por las comisiones de que más adelante se harán mención (art.6º). El capítulo II estaba dedicado al destino de los bienes descubiertos, por lo que se propondría en el artículo 2º que según lo prevenido en el artículo 12 y 13 ley 14 libro 3º de la Novísima Recopilación serían destinados a los museos aquellos objetos que fueran calificados como preciosos por la Comisión, pudiendo lo que no tuvieran esa cualidad ser enajenado en el caso de que no estuviera fijos en las áreas de los edificios pues entonces se conservarían como se hubieran encontrado. En caso de que estos bienes quisieran ser vendidos, se debería crearse una comisión compuesta de un administrador, nombrado por el Gobierno según queda indicado en el artículo 2º de este capítulo, un individuo de la Academia sevillana de Buenas Letras, miembro de la comisión de Itálica, dos artistas designados por la autoridad civil y el director de las excavaciones, cuya junta señalaría los objetos que debían conservarse (art.3º), quedando estas comisiones obligadas a remitir mensualmente al Jefe Político a fin de elevarlos al Gobierno y a la Academia de la Historia (art.4º). El proyecto de Ivo de la Cortina sería analizado por una Comisión, presentando un informe el 27 de Noviembre de 1840, en el que exponería que no tenía datos suficientes para su valoración objetivamente, por lo que deja en manos del Ministerio de la Gobernación de la Península la resolución del asunto. CAISE/9/3940/2(43). Un nuevo Informe de la Comisión de 14 de octubre de 1841 daría como conclusión que las excavaciones arqueológicas debían de paralizarse a pesar de su celo y laboriosidad reúna las circunstancias de inteligencia y conocimiento en la arqueología que se requieren para poder llevar el objeto de la mencionada empresa (...) a lo que se recalca que tampoco parece posible pueda indemnizarse a los propietarios o colonos de las tierras, de los perjuicios que debe ocasionarle la suspensión de sus labores agrícolas, problema por cierto que desgraciadamente iba a ser constante en las excavaciones arqueológicas públicas durante toda la etapa liberal.

#### *- Los inspectores de antigüedades.*

El agotamiento de la institucionalización administrativa del Patrimonio Arqueológico heredada desde la etapa borbónica dio lugar a nuevos intentos de

regular nuevas fórmulas de intervención administrativa como fue el nombramiento de los llamados inspectores de antigüedades. Desde las propias instancias locales se pediría al propio Gobierno que fuese nombrado un protector de antigüedades, como queda reflejado en la **Carta de Joaquín María Bover de Rosello, fechada el 11 de agosto de 1832** pidiendo a la Real Academia de la Historia que obtenga del Gobierno una Real Orden para que se nombre a un protector de antigüedades para la isla de Mallorca, *que auxiliado por las autoridades de la misma, impida el menoscabo de los monumentos que aún existen, y de los que en adelante se descubran*. Por fin en 1838 nacería el cargo del Inspector de Antigüedades, siguiendo el modelo que había nacido en Francia el 23 de octubre de 1830 con la denominación de Inspector General des monuments historiques a propuesta del Ministro del Interior Guizot. Se adjudicó a individuos de reconocido prestigio en lo tocante a la dedicación a la conservación de las antigüedades. Su labor se centraba primordialmente para bienes que formaban parte de la arqueología, más que del Patrimonio Monumental. Sin embargo, la Real Academia de la Historia no era la primera vez que se había dedicado a la inspección de antigüedades ya que mediante la Real Cédula de 1803, renovada por las circulares de 1818 y 1827, todavía seguía en vigor en 1838, por lo que en realidad se trataba de dar un espaldarazo en su función de vigilancia de las antigüedades, en un momento en que se estaba produciendo una nueva organización administrativa del territorio en provincias, a raíz de la promulgación de la Real Orden de 30 de noviembre de 1833, poniéndose al frente de cada una de las 49 provincias los llamados entonces Subdelegados de Fomento primero, Jefes Políticos después, y finalmente los Gobernadores Civiles, que fueron los que tendrían a su cargo la obligación de proteger las antigüedades. De esta manera el cargo de inspector de antigüedades nacía en función a la nueva realidad administrativa del país, reforzando el papel que hasta este momento había protagonizado la Real Academia de la Historia.

El primer inspector de antigüedades en Andalucía sería Manuel de la Corte y Ruano (1816-1852), quien solicitó la inspección de antigüedades el 6 de septiembre de 1838 mediante un escrito que presentaría al Director Martín Fernández Navarrete. El 12 de septiembre de 1838 expondría ante el Gobierno la necesidad de la existencia de estos inspectores, que a pesar de que las autoridades provinciales fueran las encargadas de hacerlos, no cabe duda que podrían contar con una ayuda inestimable: *La Academia sin embargo está convencida de que aun cuando las autoridades provinciales están animadas del mejor celo, nunca se conseguirá cumplidamente aquel objeto, sino hay personas determinadas, que no solo por obligación sino más bien por afición e interés hacia aquella clase de monumentos vigilen y estén siempre a la mira de su conservación*. Para el desempeño de sus funciones, se pediría al Gobierno que dotara el cargo de una potestad administrativa: *Mas para que esta inspección no sea estéril, se hace preciso que se le autorice también por el*

*Gobierno con la Real Orden competente, en que se mande a las autoridades superiores y locales de aquellas provincias (...).* Maier y Salas sospechan que en realidad no fue enviada esta Minuta de Oficio, sino que fue remitida una segunda con fecha del 19 de septiembre de 1838, cuyo contenido había cambiado sensiblemente. El 9 de octubre de 1838, el Gobierno aceptaría la proposición, por lo que se comunicaría a los Jefes Políticos de la provincia de Andalucía que la Real Academia de la Historia le había confiado a Manuel de la Corte la inspección de las antigüedades existentes y que en adelante se descubran. A la hora de precisar cuáles eran las funciones primordiales de los Inspectores de Antigüedades, cabe precisar que nunca se estableció un reglamento o instrucción específica general sobre sus funciones, obligaciones y deberes, por lo que cabe deducirse por las instrucciones específicas que se le dieron a algunos de ellos. Ya en Real Orden de 9 de octubre de 1838 se especificaba que se ocuparía del *examen e inspección material de las antigüedades, ya en la saca de dibujos, copias de inscripciones y demás que considere oportuno y conveniente*. Las dificultades que se van encontrar Manuel Ruano en el desempeño de su cargo serían muy diversas, no solamente por la actitud de inercia administrativa, que en muchos casos se tendría que enfrentar, sino por la actitud de muchos particulares, que se negarían a colaborar con los inspectores de antigüedades. El relato que nos deja insertado en el Oficio que envió al Secretario de la Real Academia de la Historia es desolador: *De ello es un vivo testimonio la tenaz y poca ilustrada negativa en que se empeñó y continua D. Simeón de Algaba, vecino de Montilla, en cuyo término posee una hacienda, y en la Torre de ella empotra una bellísima estatua griega de Minerva: estatua quizá s de la más preciosa de la provincia, y que dentro de poco será un fragmento inútil para la historia y para las artes, porque su dueño hace como alarde de tenerla a la intemperie, en un punto de tránsito, donde los labriegos rudos e ignorantes prueban y afilan sus instrumentos, complaciéndose en su destrucción (...)* La Comisión de mi cargo ha ensayado todos los medios que parecían oportunos para el logro de sus fines: *ni desembolsos propios, ni exhortaciones, ni ruegos, ni solicitudes extrajudiciales, ni persuasiones de utilidad pública, ni espíritu de gloria nacional, ni otros resortes, que debieran estimular a los funcionarios al logro de las filantrópicas miras del cuerpo que represento, y a los deseos del gobierno (...)* Y no se contentan las Autoridades Superiores e inferiores con guardar un extraño silencio a la voz de gloria y de recuerdos patrios, que les apellida: *sino que, a veces, son las primeras en decretar las ruinas de la antiguas fortalezas, muros, columnas, obeliscos, templos, villares y despoblados de grande nombradía, apoyándose equivocadamente en la Real Orden de 19 de julio del año de la fecha, como si por el artículo 5º no estuviesen exceptuados todos los antiguos recintos, que puedan interesar a la historia del país.*

#### **- Las instituciones privadas.**

No cabe duda que en estos años va a surgir una serie de instituciones privadas que debe de tenerse en cuenta no solamente a la hora de conservar y proteger estos bienes, sino que incluso tuvieron un papel primordial a la hora

de divulgar su importancia en el conocimiento de la identidad de los pueblos en que se encontraban. Cabe destacar entre ellos la Academia Mallorquina de Literatura, Antigüedades y Bellas Artes, fundada en 1837, y primordialmente la Sociedad Numismática Matritense, que fundada en el mismo año, iría a desempeñar un papel primordial en la arqueología de la etapa isabelina, aunque con distintas denominaciones.

#### **4.1.3.3. El destino de los bienes arqueológicos descubiertos en fondos públicos: La configuración de los museos arqueológicos provinciales. El Museo Arqueológico de Sevilla.**

La protección y conservación de antigüedades en el ámbito local tendría un hito importante en estos primeros años de la Sevilla liberal, la creación del Museo Arqueológico. Los precedentes se pueden encontrar en las colecciones particulares que habían surgido anteriormente desde el siglo XVIII, como el de Francisco Bruna, alcalde del Alcázar, que recogería una importante colección de objetos arqueológicos, incrementada por las excavaciones que realizara en Itálica y por las posteriores de Italia. Con la Real Orden de 19 de julio de 1835, se crearía la Junta de Museos para reunir todos los objetos antiguos posibles en el Alcázar. Unos meses después, con la Real Orden de 16 de septiembre de 1835 nacería el Museo Arqueológico de Sevilla, que se convertiría en una de las instituciones más representativa del panorama patrimonial local. El objetivo principal de esta fundación aparecería en las actas de constitución de la Junta de Museos de 1835: *Examinen, inventarién y recojan cuanto contengan los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos suprimidos, igualmente que los objetos de bellas artes que por su mérito deban conservarse*. Pronto, la Junta de Museo de la Provincia de Sevilla, va a poner sus miras en adquirir otras colecciones artísticas y arqueológicas que no hubieran pertenecido a las órdenes religiosas, por lo que empieza a interesarse por las colecciones existentes en los Reales Alcázares, que como ya habíamos anotado había sido reunida por Francisco de Bruna, una vez que se había demostrado que no pertenecían a las colecciones del Real Patrimonio, por lo que se va a reclamar para que fueran ingresados en el Museo, al mismo tiempo que los que se conservaban en el Gobierno Político de la Ciudad que habían sido descubiertos en la ciudad romana de Itálica. En cierta forma en la reclamación de estas piezas estaba la creación de un museo provincial arqueológico, como ya aparecería reflejado en un expediente promovido por la Academia de Buenas Letras. Sin embargo, por orden dictada por la Regencia Provisional del Reino el 4 de diciembre de 1840 se dispuso que el nuevo museo fuese incorporado al Provincial Artístico por considerarse más ventajoso. No sería hasta 1842 cuando podemos afirmar que había culminado tantos los trabajos de adaptación como de recopilación de material para el nuevo museo<sup>2143</sup>.

<sup>2143</sup> LORENZO MORILLA, J. “La creación del Museo Arqueológico de Sevilla” *Atrio*, 4, pp. 139-145.



## **4.2. Los límites de la intervención administrativa en la regulación del comercio de obras de arte de propiedad privada.**

### **4.2.1. El coleccionismo privado emergente en la España de Fernando VII y las necesidades de una regulación jurídica.**

Uno de los graves problemas que se van a encontrar los primeros gobiernos liberales será el de la amplia pérdida patrimonial de bienes históricos-artísticos que supuso la exportación incesante a los países europeos, especialmente Francia e Inglaterra, que dio lugar a una llamada de atención por parte de algunos críticos y eruditos a la administración estatal para que frenara esta pérdida irremediable. No cabe duda que fue la Guerra de la Independencia la que abrió el camino en el interés de los círculos intelectuales extranjeros por el patrimonio nacional hispano. Antes de 1808 los viajes que se realizaban a España era escasísimo, ya que los destinos predilectos de los viajeros ilustrados fueron Italia, Francia y Suiza, destacando dos o tres viajes de cierta importancia como los casos de Bourgoing (1797), Escher (1801) y sobre todo, Alexander de Laborde (1806). La presencia masiva de franceses e ingleses en la contienda bélica española abrió una nueva mirada que hasta este momento se veía con ojos extraños por los extranjeros, comenzando a describir los escenarios vividos por sus experiencias en sus viajes desarrollándose un importante género literario: los libros de viajes<sup>2144</sup>. Aunque las primeras descripciones partirían de las memorias bélicas que los propios contingentes fueron descubriendo por toda la geografía española (por el lado francés, los casos de Pierre Base, Brandt, Bourogne, Castellane, etc, y por el inglés, los de J. Green, Harris, B. Hall, lord Blayney y Joseph Mayle Sherer), fueron los viajeros románticos los que fueron descubriendo la imagen de una España romántica, que fue cuajando un interés inusitado hasta este momento, entre los que se encontraban Louis Viardot (1823), Chateaubriand (1823), Alexander Mackenzie (1826), Washington Irving (1828), P. Merimée (1830, 1831), H. David (1830), R. Ford (1830-1833), entre otros. Comenzó a tener cuerpo la imagen de lo pintoresco a la hora de describir, que le hacía diferente al resto de Europa, describiendo algunos de ellos la poca preocupación que existía en este momento por la conservación de las obras artísticas, como podemos contemplar en los fragmentos de la obra del francés *La Tour en Viajes por Andalucía*, cuando afirma que *A cada paso hacía las mismas observaciones, recibía las mismas impresiones. En el campo, recibía, la misma incultura; en las ciudades, las mismas calles tortuosas, la misma despreocupación por levantar las murallas caídas. Como el árabe, el español construyó palacios; pero sean palacios o chozas, siempre deja después al azar la conservación de su obra (...) esta casa está a punto de derrumbarse, pero guarda un balcón de hierro donde florece algunos lirios*<sup>2145</sup>. Richard Ford llega incluso a indicar como se debe de adquirir un lienzo o algún objeto

---

<sup>2144</sup> CALVO SERRALLER, Francisco *La imagen romántica de España*. Madrid, Cátedra, 1995. pp.17-18.

<sup>2145</sup> CALVO SERRALLER, F. *Los viajeros románticos franceses y el mito de España*, en VV. AA. *Imagen Romántica de España. Introducción*, pp.19-27. Madrid, 1981.

artístico. La imagen de una España decadente llena de tesoros artísticos abandonados despertó sin duda alguna el interés por los coleccionistas y anticuarios, lo que provocaría con el tiempo en una gran pérdida en el patrimonio histórico-artístico. Como señala Francisco Calvo Serrallera *un país invadido, pobre e inculto, ofrecía, por lo demás, todas las facilidades para que desaprensivos y necios facilitaran un tráfico ingente de piezas, importantes o no, que esquilmaran nuestro patrimonio artístico. En este sentido, el espectáculo de la fuga de pinturas de España durante el siglo XIX es escalofriante y no tiene ni justificación válida ni consuelo válida. Pero resulta, que esta catástrofe fue precisamente la causa del afianzamiento definitivo del mito español, ya que supuso no sólo el descubrimiento de nuestra pintura sino que ésta, rodeada de una aureola, sirviera de tema de inspiración a toda una generación de pintores europeos, especialmente franceses, que son, por lo demás, los que marcan la pauta de evolución estilística durante el siglo XIX en todo el continente.* Marchantes extranjeros como el francés Jean Baptiste Pierre Lebrun o el escocés William Buchanan vinieron a España para abrir sendos negocios con las obras de arte, por lo que se comenzaría a producir un amplio mercado artístico que en principio no contaba con una verdadera regulación. Tan solo va a ser promulgada una **Real Cédula de 20 de octubre de 1818** por la que se renovaba la prohibición de exportar los cuadros de maestros antiguos, para lo que la Junta de Aranceles debía de solicitar a la Real Academia un índice de obras que no podían ser exportadas, que tras un amplio debate, la Comisión de Aranceles que presidía el pintor Vicente López respondería el 10 de marzo de 1819 que era una tarea imposible por lo que se consideró más adecuado solicitar a las Aduanas del reino que rechazasen todas aquellas obras que no tuvieran el sello de alguna de las Academias del país, por lo que la Real Academia de Bellas Artes quedaba encargada de la vigilancia de las Aduanas y de extender los permisos de exportación<sup>2146</sup>. Las subastas de colecciones particulares de obras artísticas estarían a la orden del día, por lo que la libre transmisión de piezas de indudable valor era un hecho común, como fue el caso de la subasta que se realizó con la colección artística del Marqués de Leganés en 1833. El marqués de Leganés fue uno de los coleccionistas de arte de la Europa del Barroco, inventariándose a su muerte unas 1333 obras, especialmente pintura flamenca, especialmente por su relación con Rubens. Tras su muerte, el mayorazgo, el título y la colección de pinturas del marquesado pasarían a engrosar los bienes de la Casa de Altamira, permaneciendo la colección individual hasta que la ruina económica de esta Casa Nobiliaria le llevaría a venderla en subasta en almoneda en 1833; siendo uno de los principales compradores el marqués de Salamanca, que a su vez posteriormente volvería a subastar en París en 1867 cuarenta cuadros, ante la

<sup>2146</sup> ANTIGÜEDAD, María Dolores, “Coleccionismo y protección del Patrimonio: aproximación a los antecedentes legislativos sobre prohibición de exportar obras de arte”, Actas del X Congreso del CEHA *Los clasicismos en el Arte Español*, UNED, 1994, p.395; ANTIGÜEDAD, M., 2011, p.446.

pasividad del Estado<sup>2147</sup>. Sin embargo, el Estado va a ir trazando una serie de límites que en la mayor parte de los casos no van a paliar el mercado fraudulento que paralelamente al coleccionismo legal estaba surgiendo en este momento, así como el inicio de un sistema sancionador sobre las acciones de los particulares.

#### **4.2.2. Un nuevo ensayo regulador del tráfico de obras de arte en la etapa de la Regencia.**

##### **4.2.2.1. Una intensa actividad comercial de los bienes de interés histórico y artístico como reflejo de la libre disposición de uso y gozo del propietario privado en la etapa de las Regencias.**

La desidia del Gobierno va a ser constante en la comercialización de las obras de artes, no solamente en los mercados fraudulentos, sino incluso, en los que se hicieron a la luz pública, y no se hizo nada por evitarlo, a pesar de las prevenciones que constantemente la Real Academia de San Fernando les haría. Una interesante noticia sobre la pericia administrativa que se estaba dando en estos años por parte de las propias autoridades gubernamentales nos la proporciona Lorenzo Arrazola en 1855 en su célebre Enciclopedia de derecho y administración de 1858: *En 1839, el embajador español en Londres, general Villalba, daba parte al Gobierno de haber llegado a Plimut, y hallarse a su petición detenida en la aduana tal copia de pinturas, que solo de Zurbarán se contaban 400 lienzos; lo cual, no pudiendo ser sino efecto de la depredación, debía ser recobrado por la nación, si el Gobierno le daba órdenes para ello, teniendo ya requeridas de retención, entretanto, a las autoridades inglesas. El Gobierno procuró inquirir por los inventarios de exclaustación el presumible saqueo, y no pudo intentarse el recobro*<sup>2148</sup>. En algunos periódicos locales se hacen eco del tráfico ilegal de pinturas que se estaba produciendo en estos años. La noticia aparecida en El Eco del Comercio del 19-II-1836 no deja duda: *Es muy doloroso lo que está sucediendo con la venta de las pinturas que pertenecieron a los extinguidos conventos de esta provincia. Hay cuadros de gran mérito, principalmente los que existían en la Cartuja de Jerez de la Frontera; y así estos como otros muchos que aunque no de tanto valor artístico, deberían ocupar un distinguido lugar en nuestros museos por ser históricos, se están malbaratando. El cuadro de la batalla de Lepanto, que existía en la iglesia de Santo Domingo de Jerez, está apreciado en 5000 rs.; y se venderá un día de éstos, cuando nos consta el tráfico que hacen los extranjeros dando sumas de mucha más consideración por pinturas menos lindas y no tan interesantes por sus recuerdos. Lo mismo sucede respecto de las imágenes de esculturas: de modo que si no se ocurre al remedio, bien pronto embellecerán los museos y academias*

---

<sup>2147</sup> LOPEZ NAVIO, José Luis *La gran colección de pinturas del marqués de Leganes*. Ed. Analecta Calsanctiana, Madrid, 1962; POLERO, Vicente, “Colección de pinturas que reunió en su palacio el marqués de Leganés don Diego Felipe de Guzmán (siglo XVII)”, *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, VI, Madrid, 1898-1899.

<sup>2148</sup> ARRAZOLA, Lorenzo *Enciclopedia Española de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias*, Madrid, Imprenta de la Revista de la legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1858, p.597.

*extranjeras nuestras buenas producciones, en cambio de algunas pocas monedas. La resolución de la secretaría de la Gobernación del Reino, que hemos visto publicada en la Gaceta, para que los gobernadores civiles se valgan de los individuos correspondientes de la Academia de la Historia para la reunión y arreglo de los libros de los conventos suprimidos, parece que ha recaído sobre una consulta de la misma Academia, en que se proponían además otras medidas. Tal era la de que los libros de cada provincia se reuniesen en la capital de ella, formando una biblioteca pública, y que se hiciesen índices bien ordenados, remitiendo copias de ellos a la Corte. El objeto de esta propuesta es de bien conocidas ventajas, y podía evitar además el extravío de volúmenes, pues habiéndose hechos en muchas partes inventarios por tamaño y forros, sin otra expresión, es fácil sustraer tomos apreciables y poner otros sin mérito de igual tamaño. Mucho nos extraña que el Ministerio de la Gobernación haya adoptado lo menos interesante, desatendiendo lo principal; pues poco importa contar con los académicos correspondientes, si no se asegura la custodia de los libros, ni se reúnen donde pueden ser útiles<sup>2149</sup>.*

La Academia de Bellas Artes de Sevilla también intentó impedir la salida de unos cuadros de Zurbarán procedentes del convento de San Buenaventura. En los días de la exclaustación el guardián del convento vendería por la suma de cuatro mil reales al vicecónsul inglés, Julian Williams. La Comisión Artística lo intentaría evitar y se remitió la falta al Gobernador Civil, que intentó paliar la cuestión por la vía conciliatoria. El comprador acudiría al intendente con el objeto de expresarle que la venta se había hecho en tiempo hábil por los franciscanos, por lo que defendería que eran los legítimos propietarios, aceptando la única obligación no de no haber zanjado los setecientos reales que todavía se debía a la comisión de amortización, que una vez pagado, la deuda quedaba paliada. El Gobernador Civil dio cuenta al Gobierno de lo sucesivo, quien optó con proceder contra el tenedor del cuadro hasta conseguir la devolución del cuadro. Uno de los casos más lamentables ocurridos en el mercado artístico extranjero y en el que participaría el propio Gobierno fue la venta de los cuadros de la cartuja de Jerez de la Frontera al barón Taylor. Debido a la gestión del gobernador civil, Pedro Urquinaona, y el comisionado Antonio de Mesas, un gran número de cuadros procedentes de los conventos gaditanos desamortizados fueron depositados en el antiguo convento de San Agustín, organizándose una pública subasta de obras que se habían considerados de mala calidad, entre las que se encontraban las procedentes de la Cartuja de Jerez, pintadas por Zurbarán, hecho que sería denunciada por la Escuela de Artes de Cádiz y que pondría en conocimiento a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que trataría en vanos de impedir las ventas, por lo que el testaferro de Taylor en Cádiz, José Cuesta, ofreció a Mesas una cantidad importante para la compra de seis cuadros de Zurbarán de la Cartuja jerezana, quien después de ser comunicado al gobernador Urquinaona, le

<sup>2149</sup> El Eco del Comercio, 8-I-1836. Los textos están publicados en ESPADA BURGOS, Manuel URQUIJO GOITIA, Manuel Historia de España, Tomo 11, Guerra de la Independencia y época constitucional (1808-1898). Madrid, 1990, pp.368-369.

pareció muy aceptable, por lo que aceptarían la oferta, aunque anteriormente harían una consulta al Gobierno, donde se le aconsejaba al secretario de Estado la venta de los cuadros, ya que con sus fondos podrían formar un museo, a su vez que se reiteraba que estas producciones *eran algo duras y estar muy lejos de poderse igualar con las de Murillo, Velázquez y otros autores clásicos*. Unos días después, el ministro de Gobernación, Pío Pita Pizarro, daba la orden de venta en la Real Orden del 9 de junio de 1836, cuyo texto recogemos: *S.M. la Reina Gobernadora se ha servido mandar que si no se le ofreciesen a V.S. razones graves en contra, proceda inmediatamente, por medio del referido Antonio Mesas a la venta de los seis cuadros de Zurbarán que el mismo designa por la cantidad de veintidós mil duros*. Aunque la Academia de San Fernando intentó evitar su venta, informando al Gobierno el perjuicio que se iba hacer al mundo artístico, se celebraría el 21 de junio en la suma de 440.000 reales. El procedimiento se realizó en los márgenes de la realidad, ya que el 15 de julio se hizo un documento público en presencia del notario de Sevilla Ignacio Amoscótegui de Saavedra, donde quedaba constancia la cantidad pagada por cada uno, entregándose al comprador la copia del documento como formal carta de pago, en la que se : D. José Antonio de Mesas, vecino de la ciudad de Cádiz con residencia al presente en esta de Sevilla como comisionado por S.M. para recoger los efectos artísticos de los conventos suprimidos de aquella provincia, y con Real autorización para enajenarlos otorgo: que doy carta de pago a favor de D. José Cuesta, de cuatrocientos cuarenta mil reales que son los mismos en que he vendido seis cuadros de Zurbarán, que de común acuerdo nos hemos convenido en las cantidades citadas. La escritura de venta sería remitida al Gobierno así como el importe de los cuadros, que se pondría a disposición del Ministerio de Hacienda.

La venta de los cuadros de Zurbarán culminó en un agrio debate parlamentario, ya que la Academia de Bellas Artes de Madrid siguió haciendo gestiones para que los cuadros no salieran de España, por lo que un diputado gaditano, Vadillo, presentaría una proposición a las Cortes para pedir explicaciones al Gobierno sobre las enajenaciones que se habían efectuados. La reacción fue banal, ya que aunque el Ministerio del Interior cambió de titular, el nuevo ministro Acuña solamente se refirió a que él no había dado la orden de venta. El comisionado fue destituido, aunque no se le exigieron responsabilidades. Los cuadros terminarían en la galería Española del Louvre, propiedad de Luis Felipe, donde serían expuestos entre 1838-1848. Posteriormente, con la caída del monarca francés, se subastaría su colección en 1853 en la galería Christie's de Londres, donde cuatro de los cuadros serían comprado por el duque de Montpensier para decorar el palacio de San Telmo de Sevilla, pasando posteriormente al castillo de Raudón, en Auvernia, propiedad de su hija, la condesa de París, para finalmente terminar en el museo de Grenoble donde se exhiben actualmente. Otro de los cuadros de Zurbarán, el más valioso de toda la colección, la Virgen del Rosario, sería adquirida por la



colección Raczinsky y actualmente se encuentra en el museo de Poznan (Polonia)<sup>2150</sup>.

En gran parte de las capitales de las provincias se celebraban subastas de pintura, que se hacía dentro de los parámetros de la legalidad. Se conoce los nombres de grandes coleccionistas particulares en Sevilla, que de esta forma lograron de esta manera adquirir una gran cantidad de obras artísticas, como fue el caso de Antonio Bravo que logró reunir en su casa de la calle catalanes 840 cuadros, que a su muerte heredaría su sobrino Aniceto Bravo, o la más importante de Manuel López Cepero, un canónico que adquirió 878 cuadros, de los cuales 50 serían vendidos en París<sup>2151</sup>. En algunas ocasiones, aunque las mínimas, las Comisiones artísticas consiguieron detener algunas ventas fraudulentas. Así en 1838 se recuperaron sesenta cuadros de los ochenta y uno que faltaban de la Cartuja de Granada cuando eran trasladados al puerto de Málaga para embarcarlos hacia Francia<sup>2152</sup>. La destrucción patrimonial sin precedente provocado por las medidas desamortizadoras que causaría en el ámbito conventual ensombreció otro hecho significativo que perjudicó ampliamente la conservación de los bienes artísticos, la pérdida de las grandes colecciones artísticas que la nobleza española va a tener en su poder. Como afirma Gaya Nuño, el noble se convierte en mercader y el convento se liquida en almoneda. La rudeza mental y la bajísima condición intelectual de las clases pudientes decimonónica se pondría de manifiesto al vender sus bienes artísticos, en mercados fraudulentos sin ningún tipo de escrúpulos, a los que se añade la indiferencia de las autoridades y la apatía de un pueblo que no era consciente que se perdía una parte de su identidad nacional. Las circunstancias políticas y económicas favorecieron la venta de las colecciones pictóricas de la nobleza: los bajos precios que todavía se cotizaba la pintura española, al considerarla en este momento como una degeneración de la pintura italiana; el caos que se había apoderado de la nación a raíz de las guerras carlistas<sup>2153</sup>, y la pérdida económica de muchas familias nobles que se había arruinados<sup>2154</sup> y que no tuvieron ningún escrúpulos en despojarse no solamente de un patrimonio material de incalculable valor, sino a su vez de aquellos bienes que le había ayudado a configurar simbólicamente el linaje al que pertenecían.

La venta de las obras artísticas por parte de la nobleza española despertó el interés por el coleccionismo extranjero, cuyo máximo exponente lo

<sup>2150</sup> BELLO, J., 1997, pp.351-356.

<sup>2151</sup> GAYA NUÑO, Antonio *Catálogo de las obras de Zurbarán*, p.21; GESTOSO, José *Biografía del pintor Juan Valdés Leal*, Sevilla, 1918.

<sup>2152</sup> BELLO, J., 1997, p.359.

<sup>2153</sup> BOLAÑO, M., 2008, pp.231-232.

<sup>2154</sup> El empeoramiento económico de la nobleza se atribuye por la crisis de las finanzas públicas, la caída del comercio de lanas y el descenso de los precios de granos, es apuntado por A. Bahamonde como causa de la decadencia de este estamento. BAHAMONDE, A. *Crisis de la nobleza de cuna y consolidación burguesa (1840-1880)*, BAHAMONDE A. y OTERO, *Madrid en la sociedad del siglo XIX*, Vol. I, 1986, pp. 325-375.



encontramos en la figura del monarca francés Luis Felipe de Orleans, quien encargó al Barón Taylor, para que se ocupara de la compra de los bienes artísticos, para lo que probablemente sería asesorado por los Madrazo, con el fin de crear una Galería Española<sup>2155</sup>. Sin entrar en detalles de las gestiones que realizó en la adquisición de obras en España, en sus estancias del 27 de octubre de 1835 y una segunda el 19 de octubre de 1836 hasta abril de 1837, siendo sus vendedores el propio José de Madrazo, José Bueno, Serafín García de la Huerta, Manuel López Cepero o José de Monroy en Sevilla. Se sabe que más de quinientos los lienzos enviados a Francia, después de haber comprado a particulares, convento, restauradores y pintores. En Madrid, había adquirido de Javier Goya ocho lienzos de su padre, entre ellos el retrato de la duquesa de Alba pintado en el Coto de Sanlúcar y los múltiples lienzos de Velázquez, el Greco, Murillo, Herrera, Zurbarán, Valdés Leal, Ribera, Alonso Cano, y un largo etcétera. Esta inmensa colección sería instalada en las cinco salas del Louvre, que se abriría al público en 1838, la llamada Galería Española de Luis Felipe, que supuso un verdadero despertar del reconocimiento de la pintura española en el extranjero, especialmente entre los pintores realistas e impresionistas, como fue el caso de Manet<sup>2156</sup>. Sería Mariano José de Larra, que por entonces trabajaba en París alertaría públicamente de la misión de Taylor en un artículo titulado *Conventos españoles: tesoros artísticos encerrados en ellos*, que publicó en la Revista Española de Madrid el 3 de agosto de 1835<sup>2157</sup>. Como bien han sido analizadas recientemente, la creación de la Galería Española dio lugar a un verdadero debate sobre el status jurídico de estas obras de arte dio lugar a un debate sobre la legalidad de la actuación realizada por el monarca francés. Y es que el hecho de que la Galería Española se instalara en el Louvre, el museo nacional del arte que pertenecía a los ciudadanos franceses y no a la Corona, hizo creer que esta colección pertenecía también a la nación. Sin embargo, nueve meses después de su inauguración, el Rey firmaría un inventario de la Galería Española por lo que reclamaba todas las pinturas como parte de sus bienes privados. Muchos críticos franceses justificaron la creación de la Galería Española y su status como patrimonio francés, volviendo a rehabilitar las discusiones que ya había surgido desde finales del siglo XVIII entre Barbier y Quatremère<sup>2158</sup>. Cabe mencionar que la propia Academia de San Fernando en su Junta Ordinaria celebrado el 7 de agosto de 1836, denunciaría el hecho de que estaban preparados para salir de la Corte hasta 300 cuadros recogidos por el Barón Taylor y que se remitían a Valencia y desde allí mandarlos a Francia. La rapiña no solamente lo

---

<sup>2155</sup> MARINAS Cristina “La Galería Española del Rey Luis Felipe”, *Academia*, nº 57, 2º semestre de 1983, pp.127-152.

<sup>2156</sup> Un estudio exhaustivo de la Galería Española de Luis Felipe de Orleans lo encontramos en BATICLE, J.; MARINAS, C. *La galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre* París, 1981; GARCIA FELGUERA, María de los Santos, 1991, pp.92-96.

<sup>2157</sup> ALVAREZ LOPERA, José, 2004, p.85.

<sup>2158</sup> LUXENBERG, Alixa “La Galería española del Louvre (1838-1848): Ética de la adquisición política de Patrimonio” *Goya*, 2004.

encontramos en coleccionistas extranjeros, sino que las medidas desamortizadoras incrementaron las colecciones en el ámbito local, como fue el caso en Sevilla de Antonio Bravo, en la que llegó a guardar en su casa de la calle Catalanes, más de ochocientos cuadros, que pasarían después a su muerte a manos de su sobrino, y posteriormente a su viuda, quien dispersó la colección hacia 1853<sup>2159</sup>. Manuel López Cepero, ilustre canónigo de la Catedral de Sevilla, también llegó a adquirir una importante colección de pinturas, formada por más de ochocientos cuadros, que posteriormente vendería unos cincuentas en París en 1860.

**4.2.2.2. Algunas disposiciones limitando la libre disposición del propietario privado: Las Reales ordenes de 2 de septiembre de 1836, 28 de abril de 1837 y 20 de agosto de 1838, regulando el tráfico comercial de las obras de arte.**

Sin duda, el caso Taylor, como otros, llevaron durante la Regencia de la Reina Gobernadora Doña María Cristina de Borbón a promulgar entre 1836 y 1838 una serie de Reales Ordenes vedando la extracción a país extranjero de preciosos objetos artísticos e históricos. La primera Real Orden sería promulgada el **2 de septiembre de 1836**, con motivo del reconocimiento que había realizado la Real Academia de San Fernando de Madrid *de los cajones de pinturas que la Señora viuda del Embajador de Francia tiene en esta Aduana para extraer á aquel Reino, los que han sido reconocidos por el pintor de Cámara D. Juan Gálvez, nombrado al efecto*. Se recordaba a las autoridades civiles que en los puertos marítimos y fronteras se observara *la más estricta observancia de las leyes prohibitivas sobre extracción de cuadros de pinturas y de otros objetos artísticos que no sean de autores que vivan*, haciéndoles responsables *de cualesquiera omisión que se notare sobre tan interesante asunto*. De la misma manera también se enviarían a todos los *Gefes políticos de la Península e Islas adyacentes la orden más terminante para que vigilen con la mayor escrupulosidad y celo el cumplimiento de las indicadas leyes*. El **5 de octubre de 1836** una Real Orden ratificaba la prohibición de salida y venta de bienes de la Iglesia, a la vez que un Real Decreto de 6 de octubre establecía la obligación de reunir los objetos preciosos e inscribirlos en libros de asientos que impidieran la ocultación de los objetos.

Unos meses después la viuda del embajador de Francia embolsó, para remitir a París, una colección de cuadros, entre los que había algunos lienzos antiguos, adquiridos en España; y denunciado el hecho, no sabemos cómo, se detuvo el equipaje, pasando los cajones de cuadros a la Academia de Bellas Artes para que informase. Esta manifestó que varios retratos y otras pinturas de artistas modernos, como D. Federico Madrazo, Bejarano y Atienza, podían salir del territorio español; pero que los lienzos antiguos hallados en el equipaje de la viajera deberían ser detenidos, por lo que se mandó formar un expediente, cuya resolución desconocemos. Quizás, como consecuencia de este hecho, se

<sup>2159</sup> Sobre la colección de Antonio Bravo nos da noticia Amador de los Ríos en Sevilla pintoresca, 1844, p.409.

dio la **Real orden del 28 de abril de 1837** prohibiendo extraer fuera del Reino pinturas, libros ni manuscritos antiguos, basándose en otras Reales órdenes de 2 y 4 septiembre de 1836, 14 de octubre de 1801 y 16 de octubre de 1779. En la Exposición de Motivos sería recordado los estragos que la guerra había provocado en la conservación del Patrimonio Monumental: *Entre los horrores que las guerras, y más las intestinas, arrastran tras sí, no es el menor el estrago que causan á la ilustración, barbarizando los pueblos con la destrucción de los objetos científicos, literarios y artísticos. Las dos pertinaces y sangrientas guerras entrañadas en el reino por los aspirantes al cetro al principio del pasado y presente siglo, no menos que la que cinco años há nos tiene encendida el nuevo Pretendiente, han devastado tantos estos preciosos artículos, que apenas nos quedan ya en esta línea modelos que imitar.* Al mismo tiempo se insistía sobre el amplio mercado fraudulento que estaba surgiendo en el territorio español: *A esta devastación se agrega la extracción que la industria extranjera, calculando fríamente sus medios sobre nuestras propias ruinas, hace de tales curiosidades, aprovechándose de nuestras disensiones domésticas para despojarnos de cuanto ha sido siempre cebo de su envidia. Antes estas circunstancias, nuevamente se prohibía extraer de la Península para el extranjero ni provincias de Ultramar pinturas, libros ni manuscritos antiguos de autores españoles sin expresa Real Orden que lo autorice*<sup>2160</sup>. La tercera Orden se promulgaría el 20 de agosto de 1838, quien comenzaba exponiendo que *las providencias anteriores no siempre han producido todo el efecto que se prometía el Gobierno, y que su exacta observancia hubiera realizado, debido a que Las circunstancias en que se halla el país, al paso que multiplican las atenciones de los agentes del Gobierno, facilitan alguna vez á los especuladores la adquisición aunque ilícita de aquellas preciosidades, estimulándolos á intentar por todos medios su exportación. Para evitarla es necesaria una grande vigilancia y una atención continua por parte de las autoridades á quienes toca su represión.* Ante estos hechos la Reina Gobernadora nuevamentese ha (...) servido resolver que se recargue el exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes prohibitivas de la salida de los expresados efectos, y que en particular se excite el celo de los jefes políticos de las provincias fronterizas y litorales por ser los que en el modo de llenar esta parte de sus funciones pueden tener más ocasión de hacerse merecedores del aprecio de S.M. y de la gratitud de sus conciudadanos. Todavía en 1837 la Academia tuvo que enfrentarse a la venta y robos de obras de arte, como el caso del cura de Ciempozuelos que intentaría robar un retablo de mérito, una práctica que se ha extendido por muchas parroquias rurales ya que la madera era vendida para la quema<sup>2161</sup>. Una Real Orden de 31 de diciembre de 1837, dispuso que se formase un Museo Nacional en las que se reunirían esculturas y pinturas pertenecientes a los conventos de Madrid, y su provincia, Toledo, Ávila y Segovia. Antonio Gil en su obra *Instrucción Pública en España* apunta

---

<sup>2160</sup> CAMBRONERO, Carlos “La Reina gobernadora. Crónicas políticas de 1833 a 1840” *España Moderna*, Año 26, Núm.312, Madrid, Diciembre 1914, p.11.

<sup>2161</sup> ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, María Dolores “El museo de la Trinidad, germen del museo público en España” *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie VII, Hª del Arte, T.11, 1998,

como se formaron museos y bibliotecas con los bienes salvados de los antiguos conventos, intentándose en Madrid *reunir en un mismo local, cuadros de todas las escuelas españolas y de cuantos pintores han producido, a fin de presentar al público la historia del arte entre nosotros*<sup>2162</sup>. A pesar de ello, las disposiciones anteriores quedarían frustradas, por lo que se dictó una nueva **Providencia el 20 de agosto de 1838**<sup>2163</sup>, cuyo contenido era una mera repetición de las dos anteriores, aunque se lamentaba de la poca efectividad que habían tenido su propia ejecución: *Las providencias que en diferentes ocasiones se han dictado para evitar la extracción de pinturas, antigüedades y otros objetos artísticos, no siempre han producido todo el efecto que se prometía el Gobierno, y que su exacta observancia hubiera realizado, alegando como causas de las mismas las circunstancias en que se halla el país, al paso que multiplican las atenciones de los agentes del Gobierno, facilitan alguna vez á los especuladores la adquisición aunque ilícita de aquellas preciosidades, estimulándolos á intentar por todos medios su exportación, por lo que para evitarla se instaba a las autoridades competentes una grande vigilancia y una atención continua(...) con deseo de asegurar y conservar á la nación española las riquezas artísticas que aun posee, por lo que se establecía que se volviera a encargarse el exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes prohibitivas de la salida de los expresados efectos, para lo que se pedía particularmente el celo de los jefes políticos de las provincias fronterizas y litorales.*

#### **4.3. La configuración de un procedimiento sancionador en el ámbito de la tutela pública del Patrimonio Histórico-Artístico durante el Trienio Constitucional. La confiscación de la colección de bienes muebles de interés histórico y artístico de Godoy.**

Durante el periodo constitucional de 1820-1823 va a surgir el primer texto de codificación española, el código penal de 1822<sup>2164</sup>, en donde se incluía en su Título III de la Parte Primera relativa a *los Delitos contra la sociedad*, el Capítulo VII regulaba los daños en bienes o efectos pertenecientes al Estado o al común de los pueblos, algunas disposiciones dedicada a la protección del patrimonio histórico-artístico de carácter público, no extensible por consiguiente a aquellos bienes de pertenencia privada. En el artículo 343 se establecía como conducta penal incendiar voluntariamente bibliotecas, archivos o cualquier otro edificio público. Sería en el artículo 347 donde aparece probablemente la primera disposición penal dedicada a la protección del Patrimonio Histórico-Artístico al establecer que todos aquellos que voluntariamente derribasen, destruyesen, mutilaren o inutilizaren cualquier otro

<sup>2162</sup> GIL Y ZÁRATE, Antonio *De la Instrucción Pública en España*, Imprenta del Colegio de Sordomudos, Madrid, 1855, Tomo III, pp.359-360.

<sup>2163</sup> Anónimo *Reales órdenes de la Reina Gobernadora D<sup>a</sup> María Cristina de Borbón (año 1836-1838) vedando la extracción a país extranjero de preciosos objetos artísticos e históricos* en Boletín de la Real Academia de la Historia, 1907, pp. 390-392.

<sup>2164</sup> ANTON ONECA, J. "Historia del Código Penal de 1822" *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, Tomo XVIII, 1965.

*monumento público de utilidad ó de ornato y decoración de los pueblos, como estatuas, pinturas, columnas, láminas, lápidas, inscripciones u otras piezas de las bellas artes, ó algún libro manuscrito, diseño, plano, u otro documento custodiado en bibliotecas ó archivo público, o alguna máquina, instrumento alhaja ú otra cosa depositada en gabinete público, científico o literario*<sup>2165</sup>. La pena prevista sería el pago de una multa equivalente al tres tanto del valor del daño que hubiera causado. De esta manera podemos encontrar ya en el Código de 1822 el antecedente histórico del artículo 561 del Código, aunque castigándose con más dureza, con la pena de un mes a tres años de reclusión y multa equivalente al tres tanto del valor del daño causado. Sin embargo, todavía no se hace mención de las cosas de interés o valor histórico o cultural, como objeto material de la protección penal<sup>2166</sup>. Posteriormente, en los proyectos de 1830, 1831 y 1834 del Código Penal no se van a encontrar grandes novedades, por lo que se reproduce el tipo previsto en el Código de 1822 relativo al derribo o inutilización de los monumentos destinado al ornato público, aunque reduciéndose los bienes afectados en *alguna estatua, columna asiento u otro monumento o artefacto destinado al ornato público* (proyecto de 1830)<sup>2167</sup>.

Durante este periodo podemos resaltar un caso de confiscación de bienes muebles como fueron aquellos que habían pertenecidos a la colección Godoy. En solo dieciséis años, de 1792 a 1808, Godoy habría reunido más de cerca de mil cien pinturas, cuya pinacoteca se puede considerar una de las más importantes colecciones modernas de España<sup>2168</sup>. Sin embargo, su gran conjunto de obras fue muy mermado a raíz del saqueo de su palacio ocurrido en los acontecimientos bélicos de la guerra de la Independencia, quedando solo 381, por lo que el resto de obras (unas 600) habían sido sustraídas ilegalmente del edificio durante la ocupación francesa. La confiscación de las obras terminaría de deshacer el conjunto de su colección, pasando un centenar a su primera esposa, María Teresa de Borbón, condesa de Chinchón, e incluso seis cuadros al propio Fernando VII, concretamente seis retratos de su padre, Carlos IV (cuatro de ellos pintado por Goya), que serían enviados al Palacio Real como propiedad de la Corona<sup>2169</sup>. Las restantes serían cedidas a la Real Academia de San Fernando en 1816 convirtiéndose en la base de su

---

<sup>2165</sup> El artículo está reproducido en LOPEZ BARGA DE QUIROGA, J; RODRIGUEZ RAMOS, L., RUIZ DE GORDEJUELA LOPEZ, L. *Códigos penales españoles. Recopilación y concordancia*. Madrid, 1988, p.84.

<sup>2166</sup> GUISASOLA LERMA, Cristina *Delitos contra el Patrimonio Cultural: artículos 321 a 324 del Código Penal*, Valencia, 2001, p.44.

<sup>2167</sup> GUISASOLA LERMA, 2001, pp.44-45.

<sup>2168</sup> ROSA-DE VIEJO, Isadora, *Manuel Godoy, patrón de las artes y coleccionista*, 2 vols. Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1983.

<sup>2169</sup> ROSA-DE VIEJO, Isadora “La formación y dispersión de las colecciones artísticas de Manuel Godoy en Madrid, Roma y París (1792-1852)” en *Manuel Godoy y la Ilustración*, Mérida, Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 2001.

museo<sup>2170</sup>. En 1831 Godoy vende su colección de pinturas en el extranjero, muchas de sus obras pasarían a formar parte del Ermitage. Un caso paradigmático podría el ser destino del cuadro de Murillo San Agustín en el éxtasis de Murillo, que había sido pintado en 1665 por el pintor sevillano para el convento de San Agustín de Sevilla. En el catálogo de Frédéric Quillet del 1 de enero de 1808 confirma la presencia del cuadro en la casa-palacio de Godoy. Uno meses después, el 4 de enero de 1809, en un Madrid ocupado por las tropas francesas, el San Agustín figuraría en una lista de obras del palacio de Godoy seleccionado por Denon para enviarlos a París, pero por motivos que se desconoce el cuadro no se envió al museo parisino, aunque al final el Mariscal Soult se haría con él ese mismo año, tomándolo ilegalmente de entre las obras secuestradas a Godoy por el gobierno español. En París, se exponería junto con las otras doscientas pinturas sacadas de España por Soult, siendo admirado el cuadro en su residencia particular. Ya en 1839, el comerciante escocés William Buchanan intentó sin éxito conseguir el cuadro, y en 1846 Soult se lo vendería de forma privada a George Tornline, quien lo situó en su propiedad de Orwell Park (Ipswich, Suffolk), que se quedaría hasta 1933, que sería comprado a título personal por el arzobispo de Brooklyn, Thomas E. Moley, que una vez fallecido el prelado, la diócesis decidiría volver a venderla el 25 de mayo de 2005 por 1.920.000 de dólares, siendo sus compradores un matrimonio norteamericano<sup>2171</sup>.

<sup>2170</sup> ROSA-DE VIEJO, Isadora, “Cuadros de la colección de Manuel Godoy vendida por la Academia”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, primer y segundo semestre de 2001, Números, 92 y 93, p.334.

<sup>2171</sup> ROSE-DE VIEJO, Isadora Un murillo y un Zurbarán en la colección de Godoy en subastas recientes en *Archivo Español de Arte*, 313, enero-marzo, 77-99, 2006,



#### ***CAPÍTULO IV. EL TRIUNFO DE LA CONCEPCIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO MONUMENTAL COMO BIEN INHERENTE AL PROPIETARIO EN LA CONSAGRACIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1842-1868).***

---

La llegada a la mayoría de edad de Isabel II abre el camino a la construcción del Estado Liberal en el ámbito español, aunque con matices genuinamente hispano, al quedar limitado en muchos momentos por los sectores más conservadores de la burguesía, que intentaba zanjar en un régimen político estable las distintas controversias iniciados en el reinado de Fernando VII, y que no había podido paliar la reina regente, como eran las pretensiones de los carlistas (abanderados del absolutismo monárquico) y los liberales más progresistas del amplio espectro político que fue surgiendo en esta larga etapa<sup>2172</sup>. La articulación de este régimen liberal de peculiaridad hispana se irá plasmando en varias etapas, la década moderada (1844-1854), el bienio progresista (1854-1856), el bienio moderado (1856-1858), la Unión Liberal (1858-1868), cuyo denominador común será la consolidación de unos grupos políticos cuyas raíces ideológica beben del liberalismo, pero que puesta en la práctica se irá distanciando la postura entre el partido moderado y los partidos progresistas que van ir surgiendo en esta etapa<sup>2173</sup>. La década moderada, iniciada por González Bravo y continuada con la subida al poder en mayo de 1844 de Narváez supuso un claro retroceso en la historia de los derechos individuales en la España Liberal, al restringirse la libertad de prensa (decreto 6 de junio de 1845), suspenderse la venta de los bienes eclesiásticos, el rechazo de la soberanía nacional, e incluso un dominio de los moderados que dominaron el espectro político sin una clara oposición de los progresistas<sup>2174</sup>. Como apunta Fidel Gómez Ochoa, el moderantismo español consolidó el cambio liberal. Pero su obra ofrece un panorama de claroscuros. Por un lado, realizó a partir de 1845 una trascendental labor de organización administrativa y legislativa del Estado Liberal. Conformar técnicamente el nuevo Estado fue el horizonte de la acción moderada y su principal logro (...) los moderados informaron los presupuestos racionalizadores de la tradición ilustrada con los principios liberales de división de poderes e igualdad ante la ley (...) El Partido Moderado configuró técnicamente el Estado Liberal de forma similar a los países europeos avanzados. Sin embargo, la obra moderada vino además acompañada de un estilo pragmático marcado por irregularidades y falta de escrúpulos (...) donde se mostraron menos constructivos (...) La obra política

---

<sup>2172</sup> BURDIEL, Isabel, ed. Isabel II: un perfil inacabado en BURDIEL, Isabel, ed. la política en el reinado de Isabel II, *Ayer*, 29, Madrid, 1998, pp.187-216.

<sup>2173</sup> SEVILLA ANDRES, D. "Los partidos políticos españoles hasta 1868", *Revista General de Derecho*, 14, 1958, 166-167, pp.290-299.

<sup>2174</sup> Sobre la década moderada cabe mencionar COMELLAS, J.L. Los moderados en el poder (1844-1854), Madrid, 1970; CANOVAS SANCHEZ, F. *El partido moderado*, Madrid, 1982; *El moderantismo y la Constitución española de 1845*, Madrid, 1985.

realizada por el Partido Moderado consistió en la fijación de un marco institucional bastante restringido desde el que, con la colaboración de una fortalecida y parcial Corona, se desplegó una política, de rígido monopolio partidista acaparador del poder y excluyente de toda oposición<sup>2175</sup>. El bienio progresista (1854-1856) aportaría una nueva fresca institucional, y el Bienio Moderado<sup>2176</sup>. Finalmente, en la llamada segunda década moderada (1856-1868) se volvería a retomar la política del moderantismo, una vez que el 12 de octubre de 1856 sería nombrado Narvaez como jefe del gobierno, sustituyendo a O'Donnell, quedando nuevamente en vigor la Constitución de 1845. Después de una serie de conflictos políticos internos en el seno del moderantismo, llegaría al poder la llamada Unión Liberal (30 de junio de 1858-1863), bajo los auspicios del general O'Donnell, al que posteriormente sería sustituido un periodo de inestabilidad política en la que sucedieron siete gobiernos, que culminaría con la revolución de 1868.

Podemos delimitar dos etapas primordiales en la tutela del Patrimonio Monumental durante la etapa isabelina:

1º) Los límites de intervención pública en la tutela del Patrimonio Monumental en la Década moderada (1842-1854). Se produce una limitación de la intervención del Estado por el principio informador del derecho de la propiedad, fundamentado en el espíritu de la Constitución de 1845. En el ámbito de la propiedad monumental estamental, solamente encontramos una tutela pública del patrimonio monumental eclesiástico desamortizado, al configurarse como propiedad pública, que va a generar la génesis de una institucionalización administrativa, mientras que aquellos bienes pertenecientes al dominio eclesiástico la intervención tutelar del Estado es muy limitada. Sigue prevaleciendo el concepto de dominio privado en el ámbito del Patrimonio Monumental de la Corona, La pervivencia de la vigencia de la Real Cédula de 1803 en el ámbito tutelar del Patrimonio Arqueológico limita en cierta manera su configuración como bien de dominio público, al prevalecer los derechos de los dueños del terreno y los descubridores. Se va a dar una normativa sobre el tráfico de las obras de arte, que limita la libre disposición del bien en el ámbito del dominio privado. No existe ninguna concepción del Patrimonio Monumental Urbanístico, por lo que las Corporaciones Municipales

<sup>2175</sup> GOMEZ OCHOA, Félix, El conservadurismo español y el italiano durante la formación del Estado Liberal, 1848-1876. Un análisis comparado del partido moderado y la DestraStórica, en CASMIRRI, Silvana; SUAREZ CORTINA, Manuel, *La Europa del Sur en la época liberal. España, Italia y Portugal. Una perspectiva comparada*. Universidad de Cantabria, Universitá di Cassino, 1998, pp.178-179.

<sup>2176</sup> PAREDES, J. Los Bienios Progresistas y Moderado (1854-1858), en PAREDES, J. (Coord.), *Historia Contemporánea de España (1808-1839)*, Barcelona, 1996, pp.263-270.

2º) Un ensayo del intervencionismo público en la última etapa del periodo isabelino (1865-1868). El 10 de julio de 1866 Narváez formó su sexto y último gobierno, que se sostendría ya hasta su muerte, el 23 de abril de 1868, caracterizada por una política de despotismo que se proyectará en el ámbito del Patrimonio Monumental en una serie de intervenciones administrativas que culminará posteriormente en el periodo de la Restauración.

A) En el ámbito del Patrimonio Monumental Eclesiástico, especialmente en los bienes de propiedad eclesiástica, limitando el tráfico de aquellos considerados de interés histórico y artístico (Ley de 1866), así como en la política de restauración (Ley de 1861, Convenio de 1859), en que el Estado va a intervenir

B) Desvinculación del Patrimonio Monumental de la Corona, por lo que a raíz de la Ley de 1865 dejan de ser de ser propiedad privada del Rey.

C) Reforma Administrativa, con la Ley de 1865, por el que se potencia las Comisiones de Monumentos.

D) A pesar del fracaso de los proyectos de ley que no terminan de cuajar encargados a la Real Academia de la Historia, el último en 1868, se van a dar pasos iniciales a la hora de configurar el Patrimonio Arqueológico, con la culminación de la institucionalización administrativa con la fundación del Museo Arqueológico Nacional (1867) y los museos provinciales.

	Patrimonio Eclesiástico Monumental	Patrimonio Monárquico	Patrimonio Arqueológico	Tráfico comercial de obra de arte
Década moderada	Devolución de bienes desamortizados. Tutela de los bienes monumentales desamortizados Concordato de 1851	Decreto del 22 de noviembre de 1845 La herencia de Doña María Cristina y el destino de algunos bienes históricos-artísticos no vinculados a la Corona.	La preeminencia del derecho de la propiedad privada sobre la tutela pública de los hallazgos arqueológicos en dominio privado: La pervivencia de la Real Cédula de 1803	Real orden de 24 de mayo de 1849.
Unión liberal	Política de restauración de bienes (1859)	Ley de 1865	Una primera iniciativa para elaborar un proyecto de ley que regule las excavaciones arqueológicas en España: La Real Orden de 14 de diciembre de 1859.	Reales ordenes de 14 de agosto de 1856 y 6 de junio de 1865. Real orden del 10 de febrero de 1864, estableciendo las reglas y trámites que han de seguirse para la adquisición por el

			El plan general de excavaciones de 1868.	Estado de obras científicas, literarias y artísticas.
--	--	--	--	---

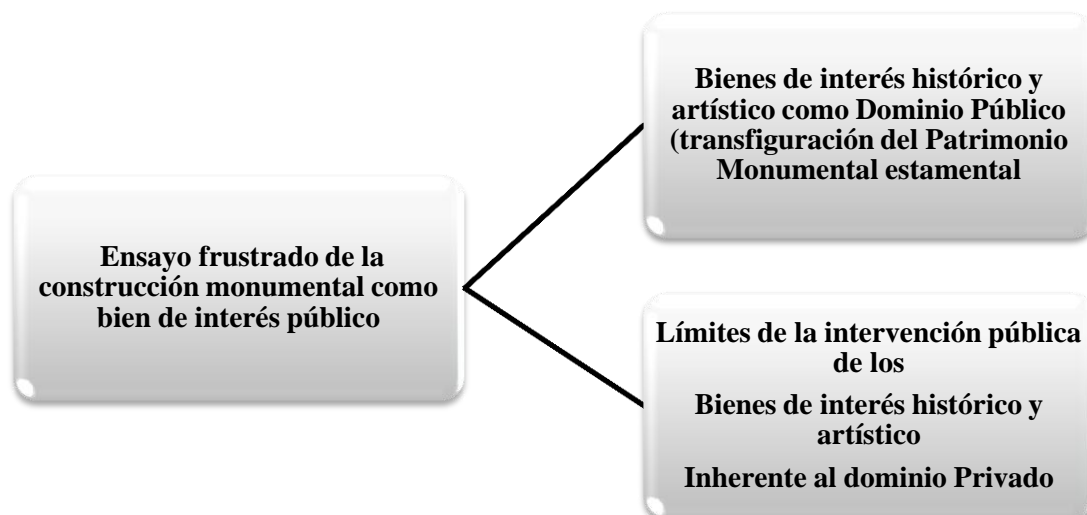
### **1. La construcción jurídica del Patrimonio Monumental como bien inherente al Estado en base a los derechos patrimoniales.**

Si tuviéramos que calificar este periodo en cuanto a la política tutelar del Patrimonio Monumental podríamos definirlo como de **ensayo frustrado de la construcción jurídica del Patrimonio Nacional**, al quedar su tutela reducida aquellos bienes que se habían incorporados como bienes nacionales, o sea los que había sido incorporados en base a la transformación que se había producido en el Patrimonio Monumental Estatal, por lo que desde esta perspectiva el Estado se había convertido en un sujeto coleccionista al igual que los propietarios particulares. La tutela jurídica del Patrimonio Monumental como en las etapas anteriores, se va ir insertar en el seno de los derechos patrimoniales, la tutela en su conservación y protección dependerá primordialmente de cuál sea su propietario. Es durante esta etapa cuando se produce la eclosión del derecho de la propiedad privada como eje ordenador del nuevo estado burgués que va a ir naciendo a raíz de la industrialización, la creación de las redes de comunicación con la irrupción del ferrocarril y los primeros indicios de creación de la banca privada, enterrando definitivamente los pocos vestigios legales que quedaban de la llamada propiedad estamental, a raíz de las nuevas medidas desamortizadoras que se irán produciendo a lo largo del reinado. Sin embargo, es un hecho significativo que el Estado va a comenzar a intervenir, aunque muy reducidamente, en aquellos sectores normativos donde considera que un supuesto interés nacional se superpone con los intereses particulares, dando lugar a un incipiente derecho administrativo, cobrando fuerza en la llamada expropiación forzosa por utilidad pública, que va a suponer en cierta forma una incipiente irrupción en la esfera privada. Al igual que el resto del ordenamiento jurídico isabelino, el derecho de la propiedad privada se convierte en la base sustentadora en la construcción jurídica del Derecho del Patrimonio Monumental, por lo que el propietario de los bienes de interés histórico y artístico asume todas las prerrogativas tutelares sobre los mismos, por lo que la intervención del Estado queda diluido en muchas ocasiones a una clara declaración de intenciones. Pese a ello, se va a ir abriendo el camino, aunque de manera muy lenta, a una transformación en el tratamiento jurídico de algunos bienes históricos-artísticos en virtud del llamado interés nacional (posteriormente interés público),

1º) La configuración de los bienes que van a ser considerados como de propiedad nacional, como son los que serán declarados como Monumentos

Históricos Nacionales, a los que se unen la vinculación a la Corona de las antiguas colecciones regias de bienes de intereses históricos-artísticos.

2º) Aquellos bienes que perteneciendo a la propiedad privada van a ser intervenidos muy levemente por el Estado, en algunas actuaciones muy concretas, herederas a su vez de etapas anteriores, No debemos de olvidar que sigue la mayor parte del patrimonio monumental probablemente sigue en manos privadas durante la etapa isabelina por lo que un gran número de bienes van a quedar fuera de la tutela pública.



La existencia de un verdadero *derecho de la propiedad privada de los bienes histórico-artísticos en la España Isabelina* es incuestionable, al igual que en otros sectores del ordenamiento, si apreciamos solamente el hecho del amplio mercado artístico de bienes muebles (esculturas, pinturas, artes suntuarias) que se estaba produciendo dentro como fuera del país o la demolición de inmuebles históricos-artísticos para la construcción de edificios particulares sin ningún tipo de obstáculos administrativos, en gran parte como efecto tardío de las medidas desamortizadoras. En principio, todos aquellos bienes que no perteneciera al Estado-Nación se quedarían fuera del marco tutelar de la Administración Monumental. A pesar de esta crítica situación, se va ir produciendo un nuevo marco jurídico, que va a ir generando un nuevo capítulo en la política tutelar del Estado Liberal, que va iría a tener unas consecuencias fundamentales en los periodos posteriores: la capacidad de intervención de la Administración en los bienes particulares en aras a una utilidad pública, que en otros sectores del ordenamiento ya se iban produciendo, cuyo ejemplo más significativo lo podemos encontrar en las

expropiaciones forzosas que estaban estimulando la construcción de las llamadas obras públicas en la España Isabelina. Desde esta perspectiva, se va ir delimitando una limitación del interés privado frente a un mero interés público bajo la denominación de interés nacional, que va a provocar la promulgación de una serie de disposiciones legales encaminadas a regular el derecho de exportación e incluso en algunos casos de importación de bienes históricos-artísticos, la irrupción en la restauración de los bienes inmuebles histórico-artístico en la esfera privada e incluso la implantación de un principio de ornato que se superponía a los intereses particulares en la remodelación de las ciudades isabelinas. Desgraciadamente en la práctica muchas de estas intervenciones que darían diluidas en el propio mecanismo administrativo caracterizado en la mayoría de los casos en una profunda inercia. A pesar de las críticas que tradicionalmente se han formulado sobre la poca operatividad que tuvo la Administración estatal sobre la política de protección del Patrimonio Histórico-Artístico en la España Isabelina, no cabe duda que fue en este periodo cuando se va a configurar definitivamente una verdadera institucionalización administrativa de tutela pública de aquellos bienes que fueron considerados dignos de ser conservados. Una amplia producción de disposiciones normativas a lo largo del periodo va a ir articulando una serie de instituciones administrativas insertadas en el organigrama del Ministerio de Instrucción Pública, que se convierte en un verdadero ensayo por parte de las autoridades públicas en el ordenamiento jurídico español, culminación al mismo tiempo del proceso nacido en etapas anteriores. En la historiografía tradicional siempre se ha achacado la inoperancia de estas instituciones por circunstancias extremas como son las producidas por los acontecimientos bélicos de los mismos, la propia composición de los miembros e incluso, pero probablemente el hecho de que muchos de estos bienes pasaron a formar parte de la esfera privada al ser comprados como bienes patrimoniales en una subasta pública, obstaculizó la acción administrativa de las mismas, al arrogarse sus nuevos dueños la potestad absoluta del derecho de la propiedad privada, por lo que en muchas ocasiones llevaría a una pérdida patrimonial.

### **1.1. Derecho absoluto de la propiedad privada e interés nacional como principios informadores en la construcción del derecho del Patrimonio Monumental en la consagración del Estado Liberal.**

#### **1.1.1. El derecho absoluto de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico en la etapa isabelina.**

Sin duda alguna el derecho de la propiedad privada se convierte en el eje del ordenamiento jurídico en la etapa isabelina. Desde todos los ámbitos ideológicos –liberales, conservadores, republicanos- se sigue considerando a la propiedad como fundamento del orden social y económico. En el ideario político de los progresistas, se abogaba por un cierto intervencionismo social,



aún siendo conscientes del daño que podía causar a *la propiedad, la propiedad inmemorial, la posesión perpetua, la posesión acreditada de los siglos, y la inestabilidad social que para el orden social se generaría*, como se refleja en el discurso pronunciado en las Cortes de 1861 por Olózaga<sup>2177</sup>. La izquierda del liberalismo, encarnada en republicanos y demócratas, no pondría en un primer momento una objeción a la esencia del derecho de la propiedad, al mismo tiempo que en el Manifiesto del Partido Democrático de 1865 se definía la propiedad como creación de la democracia moderna. Es muy interesante al respecto la tesis defendida por Salvador Gavilá en 1865 en un artículo insertado en la Revista de Legislación y Jurisprudencia: *El hombre, como hemos dicho que tiene su principio y su fin en el absoluto, y al concederle inteligencia y libertad le hemos hecho árbitro de sus destinos, es decir, que se puede separar de su misión, ejerciendo su actividad fuera del orden que por el Ser Supremo se le ha trazado(...)la propiedad nace en toda sus esferas, como el principal de los derechos inherente a la personalidad humana, derecho primitivo é inseparable de nuestro ser, derecho que nadie, sin contrariarle los planes del Eterno puede disputarle, disminuirle, ni contrariarle; derecho cuya razón de ser existe en la superioridad de nuestro yo sobre el mundo exterior(...)*<sup>2178</sup>.

La promulgación de la Constitución de 1845 va a reproducir en su Título I literalmente los llamados derechos civiles y políticos, que aparecía insertado en el texto constitucional de 1837. La protección del derecho de la propiedad privada aparece regulada en el artículo 10, cuyo texto refleja el carácter absolutista, irrenunciable por cualquier ciudadano propio del espíritu moderado en el que está impregnado<sup>2179</sup>. El derecho absoluto de la propiedad privada se proyectaría asimismo en el ordenamiento del derecho civil como eje regulador de la codificación que se produciría durante la etapa isabelina. En 1843, Fernández de la Hoz, publicaría su trabajo *Código Civil redactado a la legislación vigente*, cuyo segundo libro estaría dedicado al derecho de la propiedad privada, donde nuevamente se abordaría su carácter absoluto. El derecho de la propiedad privada va a ser una parte vital del Proyecto del Código Civil de 1851, antesala del definitivo Código de 1888, redactado por el jurista Florencio García Goyena, de clara inspiración liberal, que recogería la tradición romana que ha quedado insertado en la evolución del ordenamiento jurídico español. En el artículo 391 del Proyecto se establecía *que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que previenen las leyes o reglamentos. A lo que añadela definición del artículo corresponde al dominio pleno o propiedad no modificada; es decir, al derecho de*

---

<sup>2177</sup> ROMEO MATEO, María Cruz, “Moderados y progresistas 1834-1845”, en BURDIEL, Isabel (ed.), *la política en el reinado de Isabel II*, Ayer, 29, 1998, pp.61-62.

<sup>2178</sup> GAVILÁ, Salvador De la idea de la propiedad, en *Revista de Legislación y Jurisprudencia*, Año XIII, Tomo XXVII, Madrid, 1865, p.251.

<sup>2179</sup> Artola *El modelo constitucional español en el siglo XIX*.

gozar y disponer libre y totalmente de la cosa<sup>2180</sup>. En los años centrales del siglo se incrementa la preocupación por la defensa del derecho de la propiedad privada con la irrupción de las doctrinas socialistas, destacando como defensores a ultranza de la sacralización de la propiedad privada a Viluma (1848) y Bravo Murillo, que en 1858 en el Congreso de los Diputados hizo un llamamiento para constituir una Internacional Contrarrevolucionaria, quien afirmaba que *sin la propiedad es imposible la sociedad, que es obra de Dios; sabemos todos que no ha de perecer, pero puede eclipsarse(...)*. En una misma línea se incluirían los discursos de Pastor Díaz, quien defendería con unos matices ya absolutistas, *que la propiedad, cuando pudiera ser controvertible y problemática en el terreno de las cuestiones humanas, sería todavía de revelación y de derecho divino*. En los Proyectos de Leyes Fundamentales de Bravo Murillo de 2 de diciembre de 1852, aunque no entraron nunca en vigencia, cabe destacar la defensa a ultranza una vez más del derecho absoluto de la propiedad privada, la llamada seguridad de la propiedad. En la misma línea encontramos la Constitución Nonnata de 1856, que reproduciría en los artículos 12 y 13, el principio establecido en la Constitución de 1837. Como apuntan María Jesús Matilla y Esperanza Fraxa *aunque el debate sobre los derechos fue muy vivo, en el tema que nos ocupa no hay discrepancias profundas y no se encuentra tampoco en las bases para las leyes orgánicas*<sup>2181</sup>. Escriche defenderá la distinción entre propiedad perfecta y la propiedad imperfecta en el artículo propiedad de su Diccionario (1847). Escriche definiría a la propiedad como *el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas, en cuanto las leyes no se opongan(...)* *La propiedad se divide en perfecta é imperfecta. El vínculo que existe entre el propietario y la cosa que le pertenece, es perfectamente susceptible de división. Cuando no está dividido, cuando ningún derecho extraño viene a limitar el ejercicio del derecho de propiedad, se dice que la propiedad es perfecta. Cuando el vínculo está dividido, cuando el ejercicio del derecho de la propiedad está limitado por un derecho que pertenece á otro propietario, se dice entonces que la propiedad es imperfecta. Al mismo tiempo propiedad es equivalente de dominio, definiéndolo como el derecho ó facultad de disponer libremente de una cosa, si no lo impide la ley (...)* *El dominio se divide en pleno y menos pleno ó sea en perfecto o imperfecto*<sup>2182</sup>.

En el resto la legislación sectorial se aprecia claramente como el derecho de la propiedad privada se convierte en el fundamento esencial de todo ordenamiento jurídico. Así en las leyes promulgadas en el ordenamiento de minas el derecho del dueño del fundo donde se encontraba las canteras es preeminente, como se observa en la Ley de Minas de 1849. En la ley electoral del 18 de marzo de 1846 se restringirían aún más las condiciones para ser

<sup>2180</sup> GARCIA GOYENA, Florencio *Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español*, Zaragoza, 1974, p.208.

<sup>2181</sup> MATILLA, M<sup>a</sup> Jesús; FRAX, Esperanza, “Libertad de industria y de comercio. El derecho de propiedad”, en FLAQUER MONTEQUI (Ed.) *Derechos y Constitución*, Ayer, 34, 1999, p.34.

<sup>2182</sup> ESRICHE, J. *Diccionario de Legislación y Jurisprudencia*, Librería de la Señora viuda e hijos de D. Antonio Calleja, Madrid, 1847.

elector o elegible. Todavía en el ámbito del derecho urbanístico que gozó de un amplio desarrollo durante la segunda mitad del siglo XIX, se puede observar como los derechos de los propietarios privados de los inmuebles que iban a ser afectados por el ensanche de la ciudad quedaba paliado, plasmado en la Ley de 29 de junio de 1864, en la que no se imponía a los propietarios ninguna obligación de contribuir a los gastos de las obras ni de las expropiaciones, medida que fue muy criticada por Idelfonso Cerdá, en cuyos textos se plasma todavía el carácter absoluto de la propiedad privada que prima en cierta manera sobre los intereses generales: *Obligar a que un Ayuntamiento expropie los edificios, compre los solares que han de ocupar las calles, explane y afirme el terreno por donde ellos han de pasar y costee además la construcción de alcantarillas, la colocación de las cañerías para la conducción del agua potable (...) dejando a los propietarios colindantes por ambos lados el derecho de edificar cómo y cuando les plazca y de duplicar sus rentas, subiendo sin tasa ni medida los alquileres, explotando de esta manera los sacrificios hechos por la Administración, es, fuera de toda duda, lo más antinatural, lo más absurdo, lo más inicuo que darse puede*<sup>2183</sup>.

#### **1.1.2. Hacia un intervencionismo estatal: las obras públicas como limitadores del derecho absoluto de la propiedad privada.**

A pesar del carácter absoluto que se aprecia en el derecho de la propiedad privada en el régimen isabelino, especialmente durante la etapa moderada, no por ello surgió una incipiente intervención administrativa en el ámbito de la esfera privada, que en cierta manera mermó el derecho irreductible de los propietarios privados. Algunos autores como J. Miguel Lobato precisa que en el Proyecto del Código de 1851 comienza a vislumbrarse el inicio de un proceso de disolución legislativa del predicado carácter absoluto e ilimitado del derecho de propiedad, apareciendo de forma incipiente la idea de una necesaria armonización de este derecho, que se atribuye a los individuos, con el bien común<sup>2184</sup>. Siguiendo a García Goyena, surge una excepción al derecho absoluto de la propiedad privada, como aparece plasmado en el artículo 391 del Proyecto del Código Civil de 1851 al puntualizar que *toda legislación bien ordenada debe arreglar el ejercicio del derecho de la propiedad, como arregla el de todos los otros derechos: ella que los protege y, propiamente hablando, los crea, debe también señalarse justo límites, combinándolos con el bien común, que es el objeto y suprema ley de la sociedad: se debe ser libre con las leyes, y no contra ellas. De aquí nace la expropiación por utilidad pública... La definición corresponde al dominio pleno o propiedad no modificada; es decir, el derecho de gozar y disponer libre y totalmente de la cosa*<sup>2185</sup>. Al mismo tiempo en el artículo 392 se establecería la expropiación por utilidad pública: Ninguno será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización. El comentario de García Goyena al respecto marca la nueva

---

<sup>2183</sup> PARADA, Ramón *Derecho Urbanístico*, Marcial Pons, Barcelona, 1999, pp.7-8.

<sup>2184</sup> LOBATO GOMEZ, J. Miguel, 1989, p.202.

<sup>2185</sup> GARCIA GOYENA, Florencio, 1974, p.208.

visión de la utilidad pública sobre el derecho de la propiedad en los decenios centrales del siglo XIX, por lo que lo recogemos íntegramente: *Para que el Estado pueda hacer uso del derecho de este artículo no se requiere la absoluta y rigurosa necesidad del artículo 506 respecto de un particular, y bastarán motivos graves de utilidad pública, porque se debe racionalmente presumir que todo el que vive en una sociedad civil, ha querido obligarse á hacer posible, por algún sacrificio personal, lo que es útil a todos. Pero, bien se trate de necesidad o utilidad, siempre queda en pie el principio de la previa indemnización, pues que todos los españoles deben contribuir, en proporción de sus haberes, para los gastos del Estado*<sup>2186</sup>.

Es muy importante por la trascendencia que tendrá en la evolución legislativa de la protección del Patrimonio Monumental la inclusión en el Anteproyecto del Código de 1851 el concepto jurídico del tesoro oculto, que establece que *pertenece al que lo descubra en sitio de su propiedad, puntualizando que si el sitio fuere propio del Estado, de alguna corporación ó persona particular, se aplicarán las tres cuartas partes del tesoro al descubridor, y los restantes al propietario del sitio*. Al mismo tiempo establece que para aquellos objetos descubiertos para las ciencias y las artes se aplicarían al Estado por su justo precio, distribuyéndose en función a lo estipulado en el párrafo anterior. La definición del tesoro oculto sigue la línea de la tradición civilista española al contemplar como tal *el depósito oculto de dinero, alhajas u otros efectos preciosos, cuya legítima pertenencia no conste*. Para que el descubridor de un tesoro en un suelo ajeno constase es *indispensable que el descubrimiento fuera causal*. En los comentarios que García Goyena dedica al artículo 395 del Anteproyecto puntualiza tanto el papel del descubridor como del propietario: *El propietario viene a adquirir por derecho de accesión, pues, aunque el tesoro no se reputa fruto de la finca, y por esta razón el usufructuario no tendrá más que la mitad de que él mismo descubra en la finca usufructuada, no puede negarse que es un beneficio o provecho contenido en la finca y debe seguir su suerte. El descubridor viene á adquirir por derecho de ocupación, en cuanto se reputa que el tesoro es nullius por no constar su legítima pertenencia*<sup>2187</sup>. Al mismo tiempo aclara algunos conceptos como el que *fueren interesantes* pues se atraviesan motivos de utilidad pública, o del propio tesoro, que subraya que debe estar oculto y escondido, pues de otra manera se reputaría una cosa perdida o mostrenco, y por consiguiente no sería considerado un tesoro: *Lo esencial es que esté oculto y que no conste de su dueño (...) La antigüedad será una grave presunción de lo segundo, que en todo caso cederá la prueba en contrario, aún por testigos*. Se subraya la casualidad del descubrimiento, *por ejemplo arando, cavando, demoliendo sin este intento, no buscando a sabiendas: de lo contrario se autorizarían las usurpaciones y aun el hurto. Pero esto no se entiende con el dueño de la finca, el cual hará enteramente suyo el tesoro, ora lo busque, ora lo encuentre por casualidad*<sup>2188</sup>.

<sup>2186</sup> GARCIA GOYENA, Florencio, 1974, p.208.

<sup>2187</sup> GARCIA GOYENA, Florencio, 1974, p.209.

<sup>2188</sup> GARCIA GOYENA, Florencio, 1974, 210.

En virtud a la utilidad pública que representó la configuración de las llamadas obras públicas, que desde los años centrales del siglo se iría incrementando, teniendo como base la Instrucción de 10 de octubre de 1845 para promover y ejecutar las Obras Públicas, por la que se pretendía delimitar un régimen único en una normativa dispersa, en la que se partía de la preeminencia de la Administración en torno a la programación y construcción de las obras públicas, aunque se haría en perfecta armonía con la ideología liberal dominante en aquella época. Al mismo tiempo se insertaría la institución de la expropiación forzosa, en cuyo artículo 29 establecía que todas las obras públicas cuya ejecución hubiera sido ordenada por el Gobierno, se considerarían declaradas de utilidad pública, por lo que se podía ocupar todos los terrenos necesarios para acometer la ejecución de aquellas medidas administrativas que se estableciesen en mira a construir canales, pantanos o las vías de comunicación, como la red de ferrocarril, que en estos años centrales del siglo XIX se estaba articulando. Este régimen jurídico-administrativo se extendería a leyes posteriores como la Ley de 3 de junio de 1855, de concesiones de ferrocarriles, de 22 de julio de 1857, de carreteras y, de 5 de junio de 1859, de tranvías<sup>2189</sup>. No cabe duda que aunque en sentido menor, se puede observar en estas medidas un avance en las transformaciones del derecho de la propiedad privada en pleno auge liberal en España.

Las controversias entre los intereses de los propietarios y el propio Estado se puede observar al mismo tiempo en el ámbito del derecho agrario. De esta manera, podemos precisar la intervención estatal en la esfera del derecho de los particulares en la misma prohibición de la extracción de maderas aunque sean de propiedad particular, a raíz de la Real Orden del 27 de marzo de 1847, por el que se había dispuesto que en los montes de propiedad particular no se procederá a hacer corta alguna de maderas sin que con la autorización suficiente se dé conocimiento a los empleados del ramo, a fin de evitar los muchos excesos que se cometen al practicar tales operaciones. *Enterada S.M. y convencida de la necesidad de evitar los graves prejuicios que pueden ocasionarse a los montes del Estado y de los pueblos a la sombra de la absoluta libertad que está concedida a los particulares propietarios de fincas de esta clase para disponer de sus productos, se ha servido aprobar (...) que en todas las provincias del reino se prohíba rigurosamente la extracción y transporte de maderas de cualquier clase, sean de propiedad particular o de los montes públicos (...) colección primer cuatrimestre de 1847, p. 316.* Por el contrario, se observa el carácter absoluto del derecho de la propiedad en la Real Orden dictando disposiciones para el cumplimiento de la Real Orden del 6 de mayo de 1842,

---

<sup>2189</sup> GALAN VIOQUE, Roberto, *Obras públicas de interés general*. Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2004, pp.26-29; JIMENEZ DE CISNEROS, Francisco Javier *Obras públicas e iniciativa privada*. Editorial Montecorvo, Madrid, 1998, pp.51-72.



sobre la libertad de vendimia a favor de los propietarios *Y S.M. que considera la libertad del propietario en el uso de su propiedad como el principio que se ha de establecer siempre para promover el beneficio de la misma propiedad y los intereses del cultivo, se ha servido desestimar la petición del regidor síndico del Ayuntamiento de Peñafiel (...) También les será lícito usar de otras medidas análogas (...) encontrará fácilmente el interés privado, y que la autoridad debe acoger en tanto que no contradiga aquel gran principio de donde está siempre está la verdad. S.M. espera ajuste V.S. su conducta y la de sus subordinados al espíritu de estas disposiciones, pues la invasión que propone de la autoridad municipal en una viña de servidumbre independiente, ya para dar aviso, ya para calificación de que es llegada la sazón de la vendimia, envolviendo un ataque al derecho de la propiedad, es una medida tan injustificable como funesta.* Es la Exposición de Motivos de la Ley de Aguas de 1866 donde se observa el cambio definitivo de la concepción tradicional de dominio que hasta este momento se había perfilado en el ordenamiento jurídico español. El principio de la utilidad pública se va a ir perfilando como contrapeso al carácter absoluto de la propiedad privada como podemos apreciar en los siguientes términos: *Es, sin embargo, el agua, de índole tan especial y se diferencia de tal manera de las demás cosas sujetas al dominio del hombre, que ha dado ocasión a empeñadas cuestiones sobre la naturaleza y límites de su dominio, las cuales no serán dado evitar mientras no se establezcan reglas especiales (...) casos hay, en que a pesar de estar reconocido el derecho de la propiedad, la utilidad pública exige que sufra alguna limitación o gravamen, bien se halle éste previsto y declarado por la misma ley, como las servidumbres referentes a los predios ribereños, bien se conceda a la Administración la facultad de imponerlo.*

### **1.1.3. El principio de intervención estatal como fundamento ideológico de exaltación nacional en el Estado Isabelino.**

Con la construcción del Estado Liberal se va a proseguir la política de intervención pública en su modelaje cultural, pero no como legitimación de los valores absolutista que había fundamentado la Monarquía Borbónica, sino como base ideológica del nuevo régimen burgués nacido en el periodo isabelino, especialmente su configuración nacionalista, que lo va a tener como resultado la búsqueda de sus propias raíces históricas, produciéndose consecuentemente un amplio desarrollo de la conciencia de pertenecer a una nación en cuyos símbolos externos se encuentran una serie de bienes de interés histórico y artístico, con un claro valor simbólico, la construcción de la identidad nacional. El modelaje cultural será dirigido por el propio Estado, como ya ocurriera en la Ilustración, pero en este caso se irán identificando estos bienes más con la Nación, como sujeto abstracto que con la propia Monarquía. De esta manera el Estado se convierte en patrocinador de las artes, especialmente aquellas que exaltan los valores nacionales, elaborando un verdadero arte genuinamente español, al mismo tiempo que comienza a mirar hacia atrás por lo que comenzará a tutelar aquellos bienes del Patrimonio Monumental que considere vitales para subrayar la identidad nacional, siendo la mayoría de ellos los que habían pertenecidos a los estamentos privilegiados, por lo que los bienes desamortizados, que habían pasado a propiedad del



Estado y las colecciones regias, que vivirá un proceso de desvinculación, serán la base de este legado monumental a proteger.

El incentivo por el cultivo de las artes a lo largo de todo el periodo isabelino es un hecho significativo de la política gubernamental sobre el modelo cultural que se quiere implantar en estos años en nuestro país, siguiendo la misma modalidad que en otros países europeos, como Francia o Italia. El Estado protector de las artes sería el referente primordial a la hora de comprender la actitud pública ante el hecho cultural en este periodo, tanto en el ámbito de las letras como las propias producciones artísticas. De esta manera se promulgaría el Real **Decreto de 30 de agosto de 1847** por el que se determina que se establezca en Madrid un Teatro de declamación con el nombre de Teatro Real Español que sirva de modelo a los demás de su clase, bajo la dependencia de este Ministerio. No cabe duda que el mayor incentivo fue la celebración a instancia estatal de las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Así en el Real decreto de 28 de diciembre de 1853, por el que se estableció una exposición pública de Bellas artes cada dos años, y disponiendo que se adjudiquen los premios que se expresan a los artistas que más se distingan, encontramos plenamente el nuevo espíritu tutelar de la cultura nacional: *Todos los Gobierno de Europa se ocupan con empeño en fomentar las Bellas Artes que tanto contribuyen al esplendor y felicidad de las naciones (...) Es un error creer que porque hayan desaparecido ciertas condiciones de la sociedad antigua, condiciones que favorecieron grandemente el desarrollo de las Nobles Artes, produciendo obras inmortales que serán siempre la admiración del mundo, se ha perdido del todo ese impulso vivificador que las enaltecía y las llevaba a su mayor altura: la sociedad moderna, al paso que posee tan grandes elementos para labrar el bienestar del pueblo, procurándole nuevos goces, mayores comodidades, no carece de los medios de rivalizar de nuestros antepasados en la grandiosidad y magnificencia de los monumentos, y en cuanto puede crear el ingenio humano para que no se apague el fuego del entusiasmo artístico (...) Si ciertas Corporaciones no pueden ya prestar el apoyo de sus riquezas al fomento de las artes, los Gobiernos, que poco o nada hacían antiguamente a su favor, las reemplazan ahora con ventaja, ostentando todas tal carácter de grandiosidad y riqueza, que pocas de las ejecutadas antes pueden competir con ellas (...) Si por circunstancias que de todos son sabidas no ha podido España hasta ahora imitar este gran movimiento de las naciones modernas, tampoco es extraña a él enteramente (...) A V.M. cabe la honra de haber inaugurado en esta nación una nueva era de prosperidad y gloria sentando las bases de su futura grandeza. Si la industria está recibiendo un impulso que nunca había conocido, las Bellas Artes sienten también los efectos de la protectora solicitud de V.M.*<sup>2190</sup>.

La tutela pública de las bellas Artes llevaría al Gobierno Moderado a promulgar el **Decreto del 25 de septiembre de 1844** por el que se aprobaba el plan de enseñanza para los estudios de bellas artes de la Real Academia de San Fernando: *Tiempo hace que se reclama por todos los amantes de las bellas artes una*

---

<sup>2190</sup>Colección Legislativa de España, 3º cuatrimestre de 1853, pp.595-596.

*reforma radical en su enseñanza, a fin de elevarla a la altura que tiene en otras naciones europeas (...) Ciertamente es que la Real Academia de San Fernando ha desplegado siempre el más laudable celo en favor de esta enseñanza; pero escasa de medios, no ha podido menos de darla incompleta, y si bien ha producido gran número de distinguidos discípulos, la mayor parte han tenido que perfeccionarse con estudios particulares(...).*

Durante la etapa isabelina el Estado se convierte en patrocinador de amplios certámenes artísticos como fueron las Exposiciones Nacionales, exponentes del proteccionismo artístico. Así, el día 28 de diciembre de 1853 la reina Isabel II firmaría el decreto en que se instituían las Exposiciones Nacionales, dejándolo bajo la dependencia del Ministerio de Fomento, en cuya sede del antiguo Convento de la Trinidad, en la calle Atocha, se inauguraría la primera Exposición en 1856. Se celebrarían con una periodicidad de dos años, convirtiéndolas en unos certámenes monopolizadores del gusto artístico. Se configuraría a través de estas Exposiciones Nacionales todo un arte nacionalista al servicio del Estado, que tienen su mejor exponente en la impronta que tuvo en ellas la pintura de la historia. El **1 de mayo de 1854** se publicaría la Real Orden aprobando el reglamento para las exposiciones públicas de obras de Bellas Artes. Es de clara significancia la promulgación del Real decreto de 2 de agosto de 1858, por el que se aprobaba el reglamento para las exposiciones sucesivas de Bellas Artes, en el que se nombraba por el Gobierno un jurado especial compuesto por el Presidente de la Real Academia de San Fernando, que desempeñaría la Vicepresidencia, siete académicos de la misma, a los que podría añadir el propio Gobierno hasta un número de nueve individuos de dentro o fuera de esta corporación, ejerciendo el cargo de Secretario el Oficial de Secretaría, Jefe de Negociado de Bellas Artes en el Ministerio de Fomento. En este sentido podemos precisar que en los Reglamentos de 1860 y 1862 de la Exposición se establecía en el artículo 13 que el Gobierno concedería los premios siguientes: a la pintura de la historia, uno de primera clase, dos de segunda y dos de tercera. La mayoría de los artistas del momento intentaban conseguir una medalla de reconocimiento que le ayudaría a abrirse camino en el panorama artístico español<sup>2191</sup>.

En ocasiones el propio Estado se convierte en patrocinador económico a la hora de producir bienes artísticos, como puede observarse en la Ley del 17 de junio de 1854 por el que se le concede al Ministerio de Fomento un crédito para costear un cuadro en el que se representase la coronación del poeta Manuel José Quintana. Posteriormente, se promulgaría la Real Orden del 24 de agosto de 1854 resolviendo que se abriera en concurso público por término de dos años para los cuadros que deben representar la coronación del ilustre poeta D. Manuel José Quintana; procediéndose otro de seis meses para la aprobación

<sup>2191</sup> Sobre las Exposiciones Nacionales, GUTIERREZ BURON, J. *Exposiciones nacionales de Pintura en España en el siglo XIX*. Madrid, 1987.

de bocetos, y fijando el programa del referido concurso. Incluso se fomentó la conmemoración de hechos históricos como podemos comprobar en la Ley del 30 de enero de 1856, en la que se perpetuaba la memoria del convenio de Vergara, por el que se disponía en su artículo 1º *la erección de un monumento cívico-religioso en los campos mismos en que se verificó, y en el que se colocará el busto del Duque de la Victoria*. Al mismo tiempo se produce nuevas formulas de divulgación del Patrimonio Monumental que incrementa el grado de conocimiento de sectores de la población que hasta este momento habían sido ajeno al Patrimonio Monumental, al margen de las propias exposiciones públicas. Así, como señala el historiador del arte Juan Antonio Ramírez, el papel que va a representar la litografía, cuya invención *dotó a los artistas de una herramienta técnica, a modo de eficaz instrumento lingüístico, que condujo a un tratamiento gráfico y expresivo del monumento (...) Fue a partir de la aplicación masiva de la litografía cuando los textos y las imágenes se hermanaron para dotar de una nueva semántica al monumento histórico*. Además de estas novedosas posibilidades expresivas para la captación y representación de las sensaciones por parte del artista, la litografía ejerció otra doble influencia. En primer lugar, como medio de masa, que llevaría a una mayor divulgación del patrimonio (...) La facilidad de su empleo permitió descentralizar la producción de imágenes para el consumo masivo<sup>2192</sup>. Otro de los factores fundamentales de la divulgación patrimonial fue el impacto que representó el costumbrismo andaluz, cuyos pintores van a fijarse en el pintoresquismo de las ciudades, monumentos, especialmente andaluces, que abrió un nuevo escenario en la identidad del inmueble histórico con lo cotidiano, con el pueblo en general<sup>2193</sup>.

La formación de la génesis de una concienciación patrimonial de corte moderno tuvo un claro protagonismo en la incipiente burguesía, al estar destinada a convertirse en la verdadera protagonista en el ámbito

---

<sup>2192</sup> RAMÍREZ, Juan Antonio *Medios de masas e historia del arte*, Madrid, 1981, p.49.

<sup>2193</sup> La impronta del costumbrismo en el nuevo tratamiento dado a los monumentos está sintetizada por Ignacio González-Varas en los siguientes términos: *Este amplio miramiento de los pintores costumbristas hacia los monumentos de las ciudades andaluzas, incide de lleno en este proceso de germinación de un nuevo concepto de monumento, tanto en su imagen visual como en su representación mental y social. En primer lugar, el monumento como sujeto iconográfico encontraba un expansión especialmente apropiado dentro del interés mostrado por el costumbrismo hacia todo lo autóctono y lo genuino, primariamente identificado con el pueblo; en las escenas costumbristas fue frecuente la aparición del monumento presentado como creación del pueblo (...) Por otra parte, la estructura ideológica del costumbrismo, fue un ámbito muy a propósito para la autoexpresión de la sociedad española (...) En los episodios urbanos fue frecuente tomar al monumento como telón de fondo de estos acontecimientos donde se manifiesta el pueblo como colectividad. El monumento adquiría un prestigio especial como garante de orden y seguridad de este moderantismo social. Este importante papel del monumento en la validación de las estructuras sociales –ideológicas– explica su enorme proliferación visual en los libros de viajes o repertorios pintorescos ampliando esta visión costumbrista, pero compartiendo sus dimensiones ideológicas (...) Por último, los rudimentos del movimiento turístico moderno impulsaron la multiplicación de imágenes con vistas de las ciudades pintorescas y sus monumentos emblemáticos (...).* GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio *La Catedral de Sevilla (1881-1900) El debate sobre la restauración monumental*, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1994, pp.45-46.

socioeconómico y político de la etapa decimonónica. Sin embargo, como apunta Fontana la sociedad burguesa no llegó a constituirse como tal hasta el último tercio del siglo por el enorme lastre que suponen las viejas clases a la que la burguesía española no es capaz de someter totalmente, por lo que asistimos a un verdadero pactismo, por el miedo de perder el control de la revolución a manos de las clases populares. El lastre del Antiguo Régimen siguió presidiendo la evolución social de los primeros decenios del siglo, y no será hasta 1833, con la desaparición de Fernando VII cuando se fueron abandonando los moldes absolutistas, aunque teniendo siempre como telón de fondo el pacto social con los sectores mas inamovibles de la sociedad.<sup>2194</sup> Y es que a finales de siglo, la inmovilidad de la burguesía había culminado en el sistema conocido como oligarquía ya en la etapa de la Restauración. Este carácter moderado del estamento burgués se proyecta principalmente en el propio contexto constitucional, que aunque fue rompiendo con los antiguos lazos sociales del Antiguo Régimen, no llegó a desembocar en medidas típicamente revolucionaria, quedando como meras reformas que no significó en la definitiva transformación socio económica que hubiera necesitado el contexto español en estos momentos. La situación política española presidida por las grandes controversias entre absolutistas tradicionales y liberales, en el empeño los primeros de conservar los valores tradicionales que caracterizó a la sociedad estamental del Antiguo Régimen y los segundos por buscar las vías para la modernización del país, fue el eje vertebrador de la historia constitucional de la España del siglo XIX, desde las constituciones liberales, más de concepción moderada que verdaderamente revolucionaria, como fueron el caso de la Constitución de 1812, que se volvió a poner en vigor en el llamado Trienio Constitucional, a la que después vendría un periodo absolutista en la

Los vaivenes existentes protagonizados por la burguesía en el incipiente liberalismo español, entre el moderantismo y el pactismo con los antiguos absolutistas, también tuvo su reflejo en la situación económica, al no cuajar una verdadera industrialización, como ocurrió en amplios sectores de la geografía de Europa Occidental, al quedar estancada en cierta manera en las estructuras tradicionales agrarias que había presidido el tradicional sistema productivo español. El historiador Jordi Nadal señala que *realmente en la España decimonónica se intentó, sin regateo de esfuerzos por parte de algunos, ajustar la marcha del país a la de aquellos otros que, con el Reino Unido al frente, estaban inaugurando una nueva etapa, radicalmente distinta de las precedentes, en la historia del hombre. El salto, como es bien sabido, consistió en sustituir la base agraria de las sociedades tradicionales por otra nueva, de cuño industrial (...)*<sup>2195</sup>. Sin embargo, la

<sup>2194</sup> Sobre las transformaciones que se generaron a principios del siglo XIX, FONTANA, J. *La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833* Barcelona, 1983; *La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820*. Barcelona, 1974.

<sup>2195</sup> NADAL, Jordi, *El fracaso de la industrialización en España 1814-1913*. Barcelona, 1997, pp.9-10.

industrialización en la España decimonónica a rasgos generales estuvo marcada por el fracaso en términos de Jordi Nadal, ya que sin duda en su base social seguiría siendo un país tremendamente agrícola, especialmente por *el fracaso de las dos desamortizaciones –la del suelo y la del subsuelo– que malograron las bases naturales, agrícola y minera, en que debían haberse asentado la revolución industrial. Como telón de fondo, se ha resaltado la incidencia de los apuros de la Hacienda, perpetuados por los vicios del sistema político y culpables de bastardear las leyes desamortizadas, de restringir el mercado de capitales para la industria, de imponer una infraestructura (red ferroviaria) inadecuada(...)*<sup>2196</sup>. A ello habría que unir como ya se ha señalado anteriormente, probablemente el problema básico sería *la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas planteadas después de la pérdida de las posesiones continentales de América*<sup>2197</sup>.

La estructura agraria siguió estando presente en amplios sectores de la sociedad española, especialmente en los territorios del sur, donde una caduca aristocracia de sangre, inmovilista, siguió protagonizando la estructura económica. Aunque la nobleza aparentemente viviría un momento crítico al perder no solamente el papel político que había tenido en los sistemas absolutistas de los siglos anteriores, sino también su impronta económica, al dejar la tierra de ser la fuente de riqueza de la sociedad y ser sustituida por la industria, a lo que se uniría el desarrollo de un amplio ordenamiento que desvincularía sus bienes inmuebles mediante la abolición del régimen señorial mediante el decreto de Cortes de 11 de agosto de 1811 y las sucesivas disposiciones (1823, 1837), que acabaría con el entramado jurídico del Antiguo Régimen, la ley de 11 de octubre de 1820 y las leyes sucesivas que promulgaron las llamadas leyes de mayorazgo, o las llamadas Leyes de la Desamortización. Sin embargo, en el caso andaluz, la aristocracia siguió manteniendo su papel de privilegio social que lo hacían un referente a considerar con la permanencia de amplios territorios de latifundios, siendo uno de los pilares básicos donde se apoyó la incipiente burguesía frente a los movimientos revolucionarios. No debemos olvidar como se fue produciendo sucesivos enlaces de linajes entre las familias adineradas de la nueva burguesía y los rancieros linajes de la nobleza, surgiendo un verdadero pacto de intereses, que de alguna manera frenaría el dinamismo social propio de una sociedad industrial. En la pervivencia de las estructuras agrarias no se debe olvidar el peso que el estamento clerical siguió teniendo en el panorama social español. Las medidas reformadoras propias del insípido proceso de secularización del proceso liberal como fueron la separación de la Iglesia y el Estado, las leyes desamortizadoras, la secularización de la enseñanza religiosa o incluso el polémico pluralismo religioso no significó una merma considerable en su influencia social, al seguir teniendo un protagonismo vital en los sectores educativos y sanitarios, promovidos por las nuevas instituciones religiosas que

---

<sup>2196</sup> NADAL, Jordi, 1997, pp.226-227.

<sup>2197</sup> NADAL, Jordi, 1997, p.227.



fueron surgiendo especialmente en la etapa isabelina. Indiscutiblemente España seguía manteniendo unos vínculos sociales predominantemente católicos, que se plasma en el tradicionalismo que marcaría las estructuras sociales, más propia de una sociedad agraria que de una sociedad industrial, o incluso en las fiestas populares<sup>2198</sup>. Finalmente, en la base de la estructura social, se fue incorporando como referente principal los sectores del proletariado, que junto con el campesinado se convirtieron en los sectores menos favorecidos por la modernización. El fracaso de las distintas Reformas Agrarias, especialmente en el ámbito geográfico del sur de la Península Ibérica, dejó al campesinado en un verdadero nivel de subdesarrollo social y económico, por lo que prácticamente estaba destinado a convertirse en un elemento secundario en la nueva estructura económica<sup>2199</sup>. El proletariado surgido de la Revolución Industrial tampoco tendría un destino más favorable, al ser reducido a unos niveles de carestía que impedía su desarrollo como clase. La débil protección estatal en el ámbito socio-económico provocaron un contexto desfavorable en las condiciones de vida de grandes sectores de la población, que culminarían en los grandes conflictos que agitaría el marco social de la época tanto en las agitaciones campesinas, especialmente en Andalucía como en los movimientos revolucionarios en los sectores industriales, que dieron lugar al nacimiento del anarquismo y el socialismo.

En los albores del siglo XIX la conciencia del paso del tiempo, la conciencia de la historia produce un nuevo giro con las tesis de Rousseau en el *Contrato Social*, donde se perfila una novedosa contemplación de las emociones humanas, al defender la existencia de un pasado modélico que queda muy lejos de la realidad de los tiempos, donde el ser humano era todavía feliz. Esta búsqueda de renacer acontecimientos históricos del pasado, modos de vida fue abriendo paso a un verdadero misticismo del hecho histórico que se reflejaría en el movimiento romántico de principio de siglo. Algunos de los contemporáneos de Rousseau, como los eruditos Gibbon o Volney, reflejaban en sus textos la inspiración mística que le despertaba la contemplación de las ruinas históricas, al convertirse en verdaderos escenarios de sus recreaciones literarias. Un nuevo gusto por la antigüedades comenzaría a jalonarse por las clases altas de la sociedad, especialmente en la incipiente burguesía, que dio como resultado no solamente el coleccionismo privado de objetos materiales, sino el ansia de viajar como vehículo de conocimiento, al abrir unas verdaderas ensoñaciones del pasado, surgiendo un verdadero género literario: el libro de viaje. Sin embargo, no es hasta la definitiva instalación del régimen político liberal cuando encontramos una verdadera reivindicación del pasado histórico, al convertirlo en verdadero instrumento de legitimación de la nueva estructura de poder surgida de la Revolución. Lo que había nacido como un episodio emocional de algunos intelectuales se había convertido en una verdadera razón

<sup>2198</sup> CUENCA TORIBIO, J.M., 1961, p.45.

<sup>2199</sup> Sobre el estudio legislativo de la Reforma Agraria, MERCHAN, Antonio



de Estado. Y es que el discurso historicista llevaría a las concepciones nacionalistas, más aun cuando la idea de la nación, como apunta Javier Hernando, sería el objetivo final de la construcción del estado burgués<sup>2200</sup>. El desarrollo del nacionalismo en la Europa del siglo XIX había provocado en cierta manera una revalorización de la concepción de la comunidad política.<sup>2201</sup> El caso hispano no fue distinto a otros nacionalismos europeos, más aun al considerar un sector de la moderna historiografía que fue en el siglo XIX cuando verdaderamente se asistió a la verdadera génesis del nacionalismo español. Con el desarrollo de los llamados Estados Nacionales en el siglo XIX y de los estilos históricos tuvo su parangón en el ámbito de la historiografía, surgiendo las llamadas historias nacionales, de exaltación de valores patrióticos de claro raigambre liberal y romántico, rompiendo claramente con la tradición que hasta este momento había significado la Ilustración. Sería la historiografía francesa la que abriría esta concepción nacionalista de la historia, especialmente con autores de tendencia liberal como Michelet, que se aprecia en su famosa *Historia de Francia*, que fue publicada desde 1833 a 1873, François Guizot (1787-1874), que entre 1829 y 1832 ya escribiera *La Historia de la Civilización de Francia*, y en su etapa como ministro de Instrucción Pública (1832-1837), promulgaría la Ley Guizot, por la que se incorporaba la enseñanza pública, además de poner las bases para la investigación profesional de la historia de Francia, al crear en 1834, el *Comité des travaux historiques*, que se encargaría de la publicación de documentos inéditos en la llamada *Collection des documents inédits sur l'histoire de France*, apareciendo entre 1835 y 1852, ciento tres volúmenes. En el ámbito español, esta concepción de creación de una historia nacional vendría de la mano de la consagración del estado liberal en la etapa isabelina, siendo probablemente la *Historia de España* de Modesto Lafuente, publicada entre los años 1850-1859 en treinta volúmenes, la que inicia sin duda alguna la historiografía nacional, considerado por Pérez Bustamante el libro más leído de la etapa isabelina, y del que el historiador José María Jover no duda de señalar que *para las clases ilustradas españolas de los tiempos de la Unión Liberal, del Sexenio y, sobre todo, de la Restauración, la obra de Lafuente fue la Historia de España por antonomasia*, destacando además que *la razón de ser y el contenido de la Historia General de España de Lafuente en cuanto a exponente de un nacionalismo español, bien encuadrado en las coordenadas europeas de su tiempo*<sup>2202</sup>, superando el modelo de historia nacional que había acuñado el Padre Mariana. El objetivo de estos estudios fue la búsqueda de *una señal de identidad estudiando el origen, evolución y factores que aceleraron o retrasaron un largo proceso histórico*

---

<sup>2200</sup> Sobre la introducción del pensamiento historicista y el nacionalismo como reflejo de las concepciones románticas, HERNANDO, J., 1995, pp. 111-130.

<sup>2201</sup> HOBBSBAWN, Eric John *Nación y nacionalismos desde 1780*, Barcelona, Crítica, 1991.

<sup>2202</sup> JOVER ZAMORA, José María *Prólogo de Historia de España* T.XXXIV, pp. LXXXV. Madrid, 1991.

que culminaría en una realidad nacional unificada<sup>2203</sup>. La obra de Lafuente no sería un hecho aislado, ya que el género de la historiografía nacional tendrían un amplio número de cultivadores, especialmente en los años finales del periodo isabelino, como los escritos por Patxot y Ferrer (1857-1859), la de Antonio Cavanilles (1860-1863); la de Aldama y García González (1863-1866), etc<sup>2204</sup>. La mayor parte de estas obras tenían un amplio contenido narrativo, de clara interpretación ideológica, que en cierta manera ayudaría a la configuración de la concienciación nacional<sup>2205</sup>. Al mismo tiempo, en el resto de los países europeos se fue desarrollando la historiografía nacionalista como en Italia con Botta, en Alemania, con Heeren y Hammer, etc. El discurso nacionalista comenzaría a valorar hechos históricos concretos, como la unidad nacional, tanto legislativa como territorial<sup>2206</sup>. Cabe añadir que los estados burgueses del siglo XIX intentarían transmitir la idea de la concienciación nacional a amplios sectores sociales del país, mediante la promulgación de planes de enseñanzas que sirviera como instrumento del Estado Liberal. Así en 1857, el Ministro de Fomento, Claudio Moyano, promulga una Ley de Organización General de la Enseñanza, cuya vigencia se prolongaría hasta avanzado el siglo XX, introduciéndose la enseñanza de la Historia en todos los niveles educativos<sup>2207</sup>. Sin embargo, como apunta el papel que tuvo la escuela en la difusión de la cohesión nacional, como en el caso francés, especialmente en la etapa de la III República, no tendría su correspondencia en España, ya que se encontrarían de frente las autoridades administrativas con el problema de la analfabetización de amplios sectores de la población, calculándose más de doce millones de analfabetos en la segunda mitad del siglo. Al mismo tiempo asistiríamos al nacimiento de una nueva disciplina: la historiografía artística, que abriría el camino al conocimiento de aquellos bienes históricos que en cierta manera representaba la verdadera identidad nacional. Cuanto más profundidad tuviese el conocimiento de una obra de arte mejor se conocería las raíces históricas que definía la identidad de una nación. Se sentía urgente la necesidad de configurar una historia de arquitectura nacional, como se puede apreciar en las páginas de la revista *No me Olvides*, escritas por el arquitecto

<sup>2203</sup> BAHOMONDE, Ángel; MARTINEZ, Jesús A. *Historia de España. Siglo XIX*. Madrid, 1998. p.498.

<sup>2204</sup> MORENO ALONSO, M. *Historiografía romántica española. Introducción al estudio de la historia en el siglo XIX*. Sevilla, 1979.

<sup>2205</sup> Existe una amplia bibliografía sobre el desarrollo de la historiografía española durante el periodo romántico, de las cuales caben destacar CIRUJANO, P., ELORRIAGA, T. y PEREZ GARZON, J. S. *Historiografía y nacionalismo español (1834-1868)*. Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1985.

<sup>2206</sup> Sobre la irrupción del historicismo nacionalista GOOCH, G. P. *Historia e Historiadores en el siglo XIX*. México, 1977; LEFEBVRE, G. *El nacimiento de la historiografía moderna*. Barcelona, 1974.

<sup>2207</sup> Sobre la trascendencia de la enseñanza de la Historia en los programas educativos españoles, GARCIA GARCIA, Carmen *El papel de la Historia en el sistema educativo español durante el siglo XIX (Microlentoafinzamiento de las disciplinas históricas como saberes académicos)*. Universidad de Oviedo, 1992; PEIRO, I. *La divulgación y la enseñanza de la historia en el siglo pasado: Las peculiaridades del caso español*. Studium, 2. Teruel, 1990.

Antonio de Zabaleta, hacia 1837, en la obra de Pablo Piferrer en la *Introducción* al primer volumen de la serie *Recuerdos y Bellezas de España* o el propio Amador de los Ríos, quien en 1846, en un artículo publicado en el *Boletín Español de Arquitectura* con el título *Sobre la necesidad de escribir la historia de la arquitectura española, y sobre la influencia de este estudio en el de la civilización española*, planteaba la necesidad urgente de elaborar una historia de la arquitectura española, debido al riesgo inminente que significaba la desaparición de múltiples monumentos históricos.

Al igual que se va configurando la concepción de una historia nacional, se va ir construyendo la idea de una estética nacionalista que instrumentalizara el gusto popular por lo español. La respuesta vendría dada especialmente con el surgimiento de los estilos historicistas, que planteaban el renacer de los estilos que exaltaban a la conciencia nacional, buscando en sus orígenes la verdadera identidad colectiva, lo que provocó una verdadera fiebre de restauración arquitectónica. En la búsqueda de las raíces históricas de la nación se considerará la Edad Media como el periodo capitalizador en la configuración como identidad. El neogótico se convertiría en uno de los movimientos vitales en el desarrollo de la arquitectura española decimonónica, proyectándose en la construcción de templos, panteones e incluso en algunas viviendas. Otros estilos fueron uniéndose al gótico en su vertiente historicista como el románico, el neorrenacimiento, etc., que culminaría con el estilo conocido como eclecticismo. Probablemente sea la pintura de la historia el ejemplo más paradigmático de exaltación de la conciencia nacional en la España del siglo XIX sea la pintura de la historia. A través de estas composiciones de grandes formatos se exaltaba los grandes acontecimientos históricos, especialmente los que defendían su identidad como nación, concretamente los referentes a las escenas nacionalistas de la Guerra de la Independencia, e incluso pertenecientes a la historia antigua, como la escena de Numancia o Sagunto, o a la historia medieval, como los dedicado a la Reconquista. Se exalta además en los hechos históricos valores propios del ámbito burgués: La libertad, manipulando ideológicamente el pasado en aras de justificar el liberalismo político imperante, con escenas como la Jura de Santa Gadea o los Comuneros; la voluntad popular, intentando igualar los antiguos Concilios Visigodos con las nuevas Cortes liberales, o la exaltación del perfil de la nueva Monarquía, libre ya de perjuicios absolutistas, especialmente con Isabel II. Es la propia Monarquía liberal la que potencie este tipo de obras, llenando espacios públicos y convirtiéndose en el verdadero protagonista de las Exposiciones Nacionales<sup>2208</sup>.

Con la construcción ideológica de un estilo nacional se fue delimitando una nueva concepción oficial del Patrimonio Monumental. Durante la etapa isabelina la concepción del patrimonio a proteger se caracterizaría por su

---

<sup>2208</sup> REYERO, Carlos *La pintura de historia en España*. Madrid, 1989.

indeterminación al no ser concebido en un solo concepto uniformador todas las manifestaciones humanas que se identificara con lo que desde la antropología define como identidad cultural. No obstante poco a poco se fueron desglosando en las distintas disposiciones legales que se fueron desarrollando a lo largo del siglo una serie de bienes muy difusos que fueron objeto directa o indirectamente de protección. Sin ninguna duda serían los llamados bienes históricos-artísticos los que mayor protección van a gozar en el desarrollo de toda la legislación decimonónica, especialmente el llamado patrimonio arquitectónico que será identificado con la denominación de Monumentos Históricos Nacionales, bienes inmuebles con valor estético e histórico que representaba la identidad nacional. Los Bienes Muebles de valor estético e histórico también irán teniendo su reconocimiento en las distintas disposiciones, pero sin contar con una normativa específica, en la mayor parte de los casos a remolque de los anteriores. Poco a poco se va a ir introduciendo un nuevo concepto en la terminología jurídica que con el término de las antigüedades, que en la mayor parte de los casos se refiere a objetos arqueológicos, que se va ir especificando a medida que avance el siglo, por lo que nos encontramos con el precedente de lo que la legislación contemporánea ha definido específicamente como patrimonio arqueológico. Esta dualidad será incluso un hecho cuando la actividad de protección estará bajo el amparo de la Real Academia de San Fernando, los referentes a los bienes artísticos y la de la Real Academia de la Historia, los concernientes a los llamados bienes históricos. Los Bienes Archivísticos y Documentales irán configurándose poco a poco en el seno de la legislación isabelina. El Patrimonio de la Iglesia será en cierta manera el propietario de la mayoría de estos bienes por lo que se irán realizando sendos acuerdos proteccionistas cuyo mejor fruto lo podemos observar en el Concordato de 1851. Los Bienes Urbanísticos. No existe evidentemente ninguna referencia a otro tipo de bienes que en la legislación contemporánea sería considerado bien cultural como pudiera ser el patrimonio etnológico. Como señala Ignacio Henares Cuellar *estos reformadores románticos van a realizar nueve clasificaciones estilísticas, desde la España romana y la España gótica, hasta las monarquías cristianas heredadas inmediata de la gótica, los siglos XI y XII y los primeros años del XIII, además de la España bajo la denominación de los árabes, la Baja Edad Media que empieza con los últimos años del reinado de Fernando III, la que comienza con los primeros años del siglo XVI, la dinastía austriaca y finalmente la España bajo los reinados de la Casa de Borbón*. Propusieron además clasificar cuatro tipologías: *La primera comprenderá la arquitectura religiosa, la segunda la civil o urbana, la tercera, la militar, y la cuarta, la hidráulica*. A continuación se da una mayor precisión en la clasificación que puede constituir un interesante testimonio de lo que se considera patrimonio a mediados del siglo XIX: *Pertenecerán a la primera las basílicas, los templos y sus accesorios, los sepulcros y sarcófagos, los panteones y capillas, los cementerios y criptas, las urnas cinerarias y cipos, las aras y altares, los retablos y sillerías de los coros, las imágenes de los santos y las estatuas de los dioses. A la segunda, los arcos del triunfo, los ingresos de las poblaciones, los teatros, anfiteatros, hipódromos y circos; los palacios y*

*alcázares; los hospitales, hospicios, cárceles y demás casas de corrección y beneficencia; los jardines y paseos; los colegios, museos y universidades; los monumentos consagrados a los hombres ilustres, las columnas obeliscos y pirámides; los ornatos públicos de todas clases y las vías generales de comunicación, tanto antiguas como modernas. A la tercera las torres, torreones, cubos y bastiones; los castillos, muros y ciudadelas; las plataformas y barreras; los fosos, puentes estables y levadizos, y caminos cubiertos; las puertas, terraplenes y contrafuertes. A la cuarta las naumaquias, los puertos y arsenales, los diques y dársenas; los puentes y acueductos, las fuentes, pozos, aljibes, minados, pantanos y baños; los canales de riego y los de navegación*<sup>2209</sup>. Esta exhaustiva nómina ampliaba la concepción del patrimonio a proteger, si lo comparamos con la Cédula de 1802, revelándose como pionero en la arquitectura española, poniendo énfasis también en las cualidades de la arquitectura civil.

La revalorización del patrimonio arquitectónico va a ser un hecho tanto desde las instancias particulares como oficiales. Hasta este momento el interés por los bienes que habían configurado el patrimonio arquitectónico se habían difuminados en los múltiples artículos de las revistas románticas, algunas ya citadas, que habían dado a la luz desde principio de siglo, faltándole una verdadera sistematización en su análisis científico. La positivización del contenido se iría abriendo paso en los estudios de arquitectura que en las décadas centrales del siglo se fueron incrementando, de ahí que como señala Juan Calatrava *tal catálogo espiritual de la historia monumental hispana no habrá de componerse únicamente de elegiacas ensoñaciones o de exaltaciones marcadas por la nostálgica poética, sino también de un sólido y fundamento conocimiento histórico en el que se dejan ver ya criterios estrictamente positivistas que exigen el máximo rigor en las cuestiones de cronología o en la dilucidación de los nombres de arquitectos y artistas, con un recurso cada vez mayor a la documentación escrita*. Una nueva mirada al monumento arquitectónico, lejos de tintes románticos, con fundamentos científicos en su ámbito de investigación aparece ya en algunos textos de autores como Nicolás Magan o José María Cuadrado, al mismo tiempo que en arquitectos restauradores como Caveda y Nava. Siguiendo a Ignacio González-Varásel *progresivo conocimiento de los estilos, la atribución de un criterio moral de verdad a los principios derivados del estilo y la compartimentación histórica en épocas a las que se dota de un valor diferente, modificó sustancialmente esta apreciación del monumento: el carácter fantástico, la aproximación emocional, será sustituida por la aproximación racional, la valoración histórica por la arquitectónica, y el interés por el contenido será desplazado por el interés materia*<sup>2210</sup>. Como apunta Paul León esta intensificación del

---

<sup>2209</sup> HENARES CUELLAR, Ignacio *la Historia del Arte como instrumento operativo en la gestión y protección del Patrimonio Histórico*. en *Centros Históricos y Conservación del Patrimonio*. Madrid, 1998. pp.79-91.

<sup>2210</sup> GONZÁLEZ-VARA, Ignacio *La Catedral de Sevilla (1881-1900). El debate sobre la restauración monumental*. Sevilla, 1994, p.43.



positivismo ya se había dado en Francia en la década de 1840 a 1850. Uno de los alegatos más importantes que se da a favor del estudio monumental lo encontramos en el Informe que tres miembros de la Comisión Central de Monumentos: José de Madrazo, Aníbal Álvarez y José Caveda firmaron hacia 1844, que en cierta manera estaban abriendo el camino para la aparición de un estudio coherente del patrimonio arquitectónico. Aparece en estos años desde instituciones privadas y públicas el llamado viaje artístico, que replantearía también la mirada erudita de los bienes, al ir naciendo una nueva sensibilidad artística que le alejara de lo puramente sentimental. Además esta nueva concepción historiográfica tendrá una nueva dimensión: ser la vía para la urgente tarea de catalogación e inventario que estaban en evidente peligro de desaparición. No es hasta la publicación en 1848 del *Ensayo histórico sobre los diversos géneros de la arquitectura* de José Caveda cuando podemos establecer el primer proyecto sistemático de la historia de la arquitectura española. En cierta manera se descubre un ideal nacionalista al señalar Caveda que mediante el estudio de estos monumentos se conocían mejor sus raíces culturales: *Investigar sus orígenes, seguirlas en sus vicisitudes, descubrir al través de su estructura el espíritu y civilización de los pueblos a quienes correspondieron(...)*. Hacia 1857 nace la primera revista especializada en cuestiones arquitectónicas, el *Boletín Español de Arquitectura*, aunque tendría una vida efímera, ya que solamente daría a la luz trece números. Posteriormente, otras publicaciones como la *España Artística y Monumental* (1842-1850), los *Monumentos Arquitectónicos de España* y especialmente, *Recuerdos y Bellezas de España*, abrirían el camino para un mejor conocimiento del estado en que se encontraba los bienes históricos y artísticos nacionales. En la introducción de la primera entrega ya se exponía los propósitos de esta publicación: *dar a conocer los monumentos que atestiguan el poder, gusto y magnificencia de nuestros antepasados por medio de una publicación ilustrada, que, al mismo tiempo que sirva de recreo a la vista y a la imaginación por medio de las láminas, proporcione los datos históricos acerca de su fundación, circunstancias y acontecimientos más famosos de que fueron teatro aquellos antiguos edificios*. En 1866 F. Tubino y Oliva funda la *Revista de Bellas Artes*.

La irrupción del Romanticismo se convierte en uno de los factores determinantes de la revalorización de la arquitectura monumental hispana. La nueva estructura social nacida de los intentos de liberalización e industrialización insertada en una base tradicional agraria se proyectaría en el ámbito cultural, al quebrar las ideas estéticas del academicismo que había fundamentado el periodo absolutista del último siglo para incorporarse una estética profundamente burguesa que se identificaría que con el movimiento romántico, muy conectada con el nacionalismo. A pesar del peso crucial que en la evolución de las artes plásticas el llamado estilo tardobarroco representó en el panorama cultural en la etapa decimonónica, la nueva sociedad liberal supo captar la irrupción de los novedosas corrientes estilísticas, que amparado por la



burguesía, se fueron desarrollando en el panorama europeo, como fue especialmente el movimiento conocido como Romanticismo, en sus diferentes variedades. No cabe duda que el estilo tardobarroquista siguió teniendo un éxito en amplias capas sociales, no solamente con un claro referente artístico sino por su identificación con la sensibilidad religiosa imperante en el ámbito hispano del momento, plasmadas en los cuadros devocionales y en las composiciones plásticas muy utilizados por las clases más populares, siguiendo en cierta medida los cánones que habían sido configurado desde principio del siglo XVIII. Al mismo tiempo, la sociedad burguesa europea descubriría la pintura española del siglo XVII a lo largo del siglo XIX. En realidad, exceptuando Murillo, cuyas obras fueron muy apreciadas en Inglaterra y Ribera, considerado especialmente un pintor napolitano, el resto de los pintores barrocos españoles eran desconocidos por la crítica, incluso el posteriormente renombrado por Velázquez. El caso del pintor sevillano pueda ser paradigmático en la valoración que la pintura barroca española fue adquiriendo en los ámbitos culturales europeo, siendo el estallido de la Guerra de la Independencia la que sin duda alguna determinó que un gran número de las composiciones de la primera etapa de su producción comenzaran a afluir sobre las colecciones inglesas, lo que supuso un verdadero descubrimiento, que con el tiempo abrió el camino de una amplia producción científica que culminaría con la consagración de su imagen como padre de la pintura moderna occidental.<sup>2211</sup> Con Velázquez otros pintores barrocos como Cano, Zurbarán o Valdés comenzaron a ser considerado por el coleccionismo burgués.<sup>2212</sup> Al mismo tiempo las leyes desamortizadoras en cierto modo despertaron un vivo interés por la pintura barroca al configurar la base de las colecciones que configurarían los futuros museos de Bellas Artes por la geografía española. La pervivencia del neoclasicismo, que había sido el exponente vital de las clases pudientes del Antiguo Régimen, fue prolongándose en los primeros decenios del siglo XIX. Sin embargo, las ideas del clasicismo serían erosionadas paulatinamente por el movimiento estilístico que caracterizó el panorama cultural de la España decimonónica fue sin duda alguna lo que se ha definido tradicionalmente como Romanticismo. Aunque en realidad la historiografía artística no se pone de acuerdo en una definición global, como ocurriera en el caso del Renacimiento o el Barroco, e incluso como en el caso de Honour<sup>2213</sup> que rechaza una definición genérica del concepto, nos acercamos a la impronta de Javier Marías que considera *el Romanticismo como la superestructura ideológica de toda la burguesía*<sup>2214</sup>. Al contrario con lo que ocurrió en otras

---

<sup>2211</sup> ALVAREZ LOPERA, José *Conocimiento e imagen de Velázquez en el XIX* en JUSTI, Carl *Velázquez y su siglo*. 1953/1999, pp.XI-XVI. La imagen de Velázquez fue adquiriendo una relevancia excepcional por la erudición europea, con los análisis exhaustivos que realizaran Stirling y Thoré, y a finales del siglo Carl Justi.

<sup>2212</sup> GARCÍA FELGUERA, M<sup>a</sup> de los Santos *Viajes, eruditos y artistas. Los europeos ante la pintura española del siglo de Oro*. Madrid, 1991.

<sup>2213</sup> HONOUR, H. *El Romanticismo*. Madrid, Cátedra, 1981, p.13.

<sup>2214</sup> HERNANDO, Javier *El pensamiento romántico y el arte en España* Madrid, 1995. p.31.

áreas europeas, como Francia o Inglaterra, donde se desplegó el movimiento romántico en toda su esencia desde principios del siglo XIX, el caso hispano fue diferente, llegando con retraso (los decenios centrales del siglo) causado principalmente por la debilidad de la burguesía española, resultando un romanticismo. La burguesía por consiguiente adquirió la cultura romántica como eje vertebrador de su conciencia como clase, aunque sin llegar a las concepciones revolucionarias de otros ámbitos europeos. Como afirma Ricardo Nava-Ruiz el peculiar Romanticismo español se encontraría en la siguiente situación: *Como patriotas y miembros de una sociedad conservadora, se veían obligados a aceptar una tradición, la del Siglo de Oro, con cuyos principios discordaban. Como ilustrados tenían que admitir los principios del siglo XVIII, con cuyas formas literarias y de gobierno disentían. Como liberales debían europeizar el país, democratizarlo, abrirlo a la libertad cuando el país sufría la peor institucional de su historia e iniciaba una serie de crueles y terribles guerras fratricidas. ¿Que hacer? La solución hubo de ser necesariamente un compromiso: modernizar moderadamente, abrir España a ideas y direcciones europeas con cautela, no rechazar la tradición, sino intentar una síntesis de todo lo anterior con el nuevo espíritu. El Romanticismo español representa la convergencia de dos tradiciones, salvando de cada uno lo mejor, y de los principios liberales. Por eso, en contraste con Francia, aparece como un movimiento bastante moderado, al modo inglés(...)*<sup>2215</sup>. La aparición del Romanticismo no llegaría a España hasta 1830, como han reconocido los especialistas en el asunto, desde Menéndez Pelayo hasta Allison Peers<sup>2216</sup>.

Lo romántico era identificado con la autonomía y experiencia espiritual, en la valoración de lo subjetivo y el acto de la creación frente al normativismo de las reglas, ayudaban culturalmente a ahondar el individualismo político y económico, que habían enarbolados desde finales del siglo XVIII. Al mismo tiempo le permitiría abrir sus miras hacia el pasado, buscando modelos exóticos que le permitieran rastrear sobre las raíces de su propia identidad cultural. El culto a los vestigios monumentales derivó en lo que Simón Marchán denominaría *La poética de las ruinas*<sup>2217</sup> o también conocido como pintoresquismo. Lo pintoresco no había nacido en el ámbito decimonónico, sino que arranca su génesis en las posiciones ideológicas del neoclasicismo, más cercano a sentimientos subjetivistas que el carácter objetivo que había identificado los caracteres del arte del siglo XVIII. Es en los textos de Jovellanos, verdadero introductor del concepto de lo pintoresco, quien sintetiza el concepto de pintoresco: *terrenos solitarios y desiertos, campiñas pobladas o cultivadas, montañas, rocas y precipicios; ríos, lagos y cascadas; ruinas de*

<sup>2215</sup> NAVAS-RUIZ, Ricardo *El Romanticismo español* Salamanca, 1973, pp.21-22.

<sup>2216</sup> Sobre la introducción del Romanticismo español, ALLISON PEERS, E. *Historia del movimiento romántico español*, 2 Vol. Madrid, 1973; DIAZ PLAJA, Guillermo *Introducción al estudio del Romanticismo español*. Madrid, 1980; JURETSCHKE, H. *Los orígenes del Romanticismo en España*. Madrid, 1982

<sup>2217</sup> MARCHÁN FIZ, Simón *La poética de las ruinas, un capítulo casi olvidado en la historia del gusto* en Fragmentos, 1985, pp.4-15.

*monasterios, castillos y sepulcros, y en fin, cuanto la vista descubre de sublime y de raro por su belleza, su gracia o bien su misma honradez.* Por consiguiente, la contemplación de la naturaleza se consideraba un fuerte estímulo de emociones, ayudando así a emular en la mente humana una amplia sensibilidad. En base a ellos, surgiría los llamados jardines pintorescos, verdaderos entornos artificiales donde naturaleza y obras artísticas se mezclaban para producir todo tipo de sensaciones: tranquilidad, melancolía, emociones, etc. En contraposición a este idealismo romántico del monumento histórico, surgiría el llamado historicismo romántico como eje vertebrador de la civilización europea del siglo XIX<sup>2218</sup>. No hay ninguna duda de que no es hasta el siglo XIX cuando no va a existir en la conciencia social una verdadera reflexión sobre el tiempo histórico, el proceso dinámico de etapas concretas que jalonan una sociedad, en muchas ocasiones porque no había una verdadera constancia social del hecho y otras porque se renunciaba a los hechos del pasado para dinamizar mejor el presente. Hasta el siglo XVI había predominado en Europa una visión pesimista del mundo y la historia, pues existía la concepción de que a medida que iba pasando el tiempo se alejaba de la Edad Dorada, identificada con el paraíso terrenal. Fueron los pensadores Vico, Voltaire y Montesquieu en el siglo XVIII los primeros que abrieron una nueva perspectiva sobre la importancia del estudio de la historia, identificada como proyección del progreso humano, por lo que nace una verdadera conciencia de los cambios sociales que se van produciendo en las colectividades humanas. Aparece una necesidad de la historia para fundamentar esta constancia de progreso, por lo que se le adjudicaría un valor especial a los monumentos y restos arqueológicos (bienes materiales que testimonian los hechos del pasado). Como apunta Joseph Ballart, que sobre estas bases de las percepciones sobre el pasado sigue el patrón siguiente: *la naturaleza humana progresa inexorablemente; hay testimonios que lo ponen de manifiesto, por tanto, los productos de los que nos han precedido que han quedado, algún valor han de tener de prueba, y en cualquier caso seguro que tienen un valor general instructivo sobre la propia naturaleza humana.* La búsqueda de los hechos del pasado se intensificaría con las excavaciones de Pompeya y Herculano bajo los auspicios de la propia monarquía borbónica personalizada en Carlos III.

Uno de los estilos que más pujanza va a tener en estos años sería el mudéjar, aunque no es hasta los años finales de la etapa isabelina cuando podemos decir que exista una verdadera concienciación de su existencia. Se considera que el discurso de ingreso en la Real Academia de San Fernando pronunciado por José Amador de los Ríos el 19 de junio de 1859, y la contestación de Pedro de Madrazo, con el título *el estilo mudéjar en arquitectura*, sea el punto de partida de la configuración real de este estilo en la historiografía española, ya que hasta este momento no se había tenido en

---

<sup>2218</sup> HENARES, I. y J. CALATRAVA *El historicismo romántico en Romanticismo y Teoría del Arte en España*. Madrid, 1995.

cuenta en el panorama arquitectónico de carácter histórico, diferenciándolo del arte mozárabe, que corregía así la clasificación de Eugenio Llaguno que aun estaba vigente. La nueva denominación del estilo mudéjar incluso dio paso a un amplio debate entre la crítica del momento sobre la autoría de su denominación, ya que algunos historiadores como Manuel de Assas la había utilizado anteriormente en una serie de artículos publicado desde el 8 de noviembre de 1857 en el *Seminario Pintoresco Español*<sup>2219</sup>. El mudéjar se revalorizaba no solamente por sus consideraciones estilísticas, sino por su relevancia como verdadera arquitectura nacional, por lo que se impregnaba de un verdadero discurso nacionalista, era el verdadero estilo genuino español que como señalaría Amador de los Ríos *no tiene par ni semejante en las demás naciones meridionales*. A finales del siglo XIX, habría nacido un nuevo movimiento estético, el neomudéjar, que se insertaba dentro de las corrientes nacionalistas que fueron modelando los movimientos historicistas de espíritu burgués. Pero sin duda el estilo por antonomasia del periodo isabelino sería la revalorización del gótico. Ya desde principio del siglo se había podido asistir a una verdadera pasión por el gusto medievalista en toda Europa, que llevaron a eruditos como François Auguste Chateaubriand, que publicó en Francia *Le Génie du Christianisme* (1802), o en las propias novelas históricas de Walter Scott, Víctor Hugo o Dumas, que llevaron a convertirlo en marco de su desarrollo narrativo. Siguiendo los modelos franceses, se estimularon en España los escritos por la valoración de la arquitectura medieval, donde la situación de indiferencia y abandono de las más significativas obras había sido un exponente en la etapa fernandina, aunque sin olvidar los análisis que ya había realizado sobre la arquitectura medieval por Jovellanos. No sería hasta mediados del siglo, al amparo de las ideas prerrománticas, cuando comienza a desarrollarse una intensa literatura artística de revalorización del gótico. Ya en 1833, Juan Miguel Inclán Valdés insertaría al estilo en un lugar privilegiado en su historia de la arquitectura<sup>2220</sup>. Uno de los principales objetivos del ensayo citado de José Caveda sobre la arquitectura española fue sin duda alguna rescatar al gótico del olvido que había tenido en el ámbito de la historiografía nacional. Los manuales de viajeros, especialmente el conocido *Recuerdos y Bellezas de España*, aparecían ya una amplia descripción de monumentos medievales que hasta este momento había sido ignorado por los eruditos hispanos. Como apunta Ignacio González-Vara, *los libros de viajes, contribuyeron decididamente a convertir a los monumentos medievales en los protagonistas del patrimonio histórico(...) que los convertiría en el objeto privilegiado de la política del patrimonio durante el siglo XIX*.

<sup>2219</sup> FRAGA GONZALEZ, M.C. *Arquitectura mudéjar en la Baja Andalucía*. Santa Cruz de Tenerife, 1977. pp.15-26.

<sup>2220</sup> INCLAN VALDES, J.M. *Apuntes para la historia de la arquitectura y observaciones sobre la que se distingue con la denominación de gótica*. Madrid, 1833.

No podemos pasar por alto las aportaciones de la literatura científica que fue surgiendo en el ámbito catalán al identificarlo con el incipiente nacionalismo que se había fraguando en estos años centrales del siglo. Un gran número de autores comenzaron a desarrollar una amplia literatura científica sobre el pasado histórico medieval, como Manuel de Assas, Rafael Mitjana de las Doblas, José Amador de los Ríos, Valentín Cardedera<sup>2221</sup>, Francisco Pi y Margall, Federico de Madrazo, etc., que contribuyeron a definir una visión del gótico, desde ámbitos todavía pintorescos hasta una visión más positivista que le fue dando contenido científico. Fue Elías Rogent fue uno de los primeros críticos que le darían el carácter racionalista al estilo, quedando patente en el discurso que pronunciaría en 1857 en la Academia con el título de *Arquitectura medieval en Cataluña*, que valoraría de su estructura el *carácter y unidad de sus formas*<sup>2222</sup>. La verdadera relevancia que tendría el arte gótico, al considerarse el estilo por excelencia, no solamente estaba fundamentado desde el punto de vista estético, sino por los valores que representaba: el nacionalismo, el espíritu cristiano y la libertad<sup>2223</sup>. El carácter nacionalista del gótico se perfilaba al identificar el estilo del periodo donde se consideraba el germen de la sociedad burguesa. El historicismo romántico contempló en la arquitectura medieval la génesis de la nación, especialmente en Alemania, a raíz de la publicación en 1772 de la obra de Goethe *Von deutscher Baukunst*, un himno a la Catedral de Estrasburgo, que posteriormente tendría su plasmación en el nacionalismo catalán de los decenios centrales del siglo. El espíritu cristiano aparecería presente ampliamente en varios eruditos de la época, como fue el caso de Mitjana quien afirmaba *el templo cristiano representa la concepción de Dios y su obra, y que la expresión perfecta del pensamiento cristiano no ha sido formulada por ninguna arquitectura anterior a la gótica*<sup>2224</sup>. Sería la catedral gótica la verdadera protagonista de este carácter cristiano en la contemplación arquitectónica, convirtiéndose en uno de los bienes más protegidos en los decenios centrales del siglo decimonónico, más aun cuando se plantearía el programa de restauración pertinente. Sus formas elevadas y aéreas y sus escasos muros que permitía la entrada sin restricciones de la luz, convertía al interior de las catedrales en el modelo fundamental de la esencia cristiana de la arquitectura. Va a existir incluso una visión suprema del estilo gótico como arquitectura cristiana por excelencia frente a las demás estilos. En los *Recuerdos y Bellezas de España* de Pablo Piferrer se convierte la catedral en un modelo ético de la libertad civil frente a la teocracia y el feudalismo. La libertad era identificada en el arte gótico, ya que gracias al

---

<sup>2221</sup> Vicente Cardedera publicó entre 1835 y 1836 en la revista *El Artista* la primera historia del arte medieval español, en la que todavía se proyecta una visión pintoresca en cuanto a sus precisiones.

<sup>2222</sup> ARRECHEA, J., 1989, p.155.

<sup>2223</sup> Una interesante reflexión sobre los valores del gótico lo encontramos en HERNANDO, J., 1995, pp.125-136.

<sup>2224</sup> MITJANA DE LAS ROBLAS, R. *Estudios históricos sobre las Bellas artes en la Edad Media, Arquitectura siglos XIII-XIV-XV* en *El siglo pintoresco*, 1845, pp.163-168.



desarrollo de los burgos frente a la opresión de la nobleza feudal se pudo desarrollar el arte gótico. Nuevamente en los textos de Mitjana podemos apreciar estas posturas en sus textos<sup>2225</sup>, e incluso defenderá que el gótico es *la expresión orgánica de los anhelos de libertad de las ciudades y sus francmasones*. Curiosamente en el ámbito de la historiografía artística, en contraposición al gótico, el románico no encontró la valoración adecuada en los años centrales del siglo. Desde los textos de la Ilustración, como es el caso de Jovellanos, la arquitectura románica era agrupada bajo la denominación de “bizantina” o “romano-bizantina”. En Mitjana encontramos textos que arremeten contra el arte de la Alta Edad Media considerándolo sombrío, triste y misteriosa. No debemos de olvidar que en cierta manera no solamente había en ello un rechazo a lo puramente estético sino también a la propia Iglesia, al identificarlo como un estilo teocrático: *Bien se deja ver que el poder teocrático no participa nunca, no se interesa nunca en las pasiones y devaneos de los pueblos y que comprende la religión de una manera más sombría que los seglares*<sup>2226</sup>. Similares opiniones encontramos en el *Ensayo* de José Caveda, quien en 1848 definiría al Románico como *emblemata de poder teocrático, que la ha creado y extendido*<sup>2227</sup>. Sin embargo, autores como Amador de los Ríos revitalizó a la arquitectura románica al contemplarla con una capacidad ornamental que lo alejaba de sus connotaciones bárbaras que había sido calificada. En 1857, el gran arquitecto catalán Elias Rogent publicó en 1857 que la *arquitectura románica era síntesis perfecta entre las tradiciones cristianas y oriental*<sup>2228</sup>. Con Rogent la *arquitectura románica se introduce en nuestra arquitectura una visión racional alejada de aquellas interpretaciones románticas tendentes a primar las interpretaciones históricos-filosóficas sobre lo puramente disciplinarios*<sup>2229</sup>. En su conocida obra sobre el santuario de San Cugat de Valles ensalzaría las magnificencias del románico. Al mismo tiempo los historiadores Nicolás Castor de Caunedo o José María Quadrado, revitalizarían el arte asturiano como buen referente de la arquitectura española. Castor de Caunedo publicaría incluso un artículo en el Seminario Pintoresco Español dedicado a Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, donde además de elogiar su arquitectura, criticaría las restauraciones que se habían realizado en estos años, sin ningún tipo de rigor científico.

El descubrimiento científico de las antigüedades fue otro pilar determinante en la búsqueda de la identidad nacional, en un momento en que comenzaba a desarrollarse la arqueología en el ámbito hispano. No nacería en España como una disciplina científica coherente hasta la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la recepción de las teorías evolucionistas con los trabajos

<sup>2225</sup> Mitjana en su obra ya citada de *Estudios Históricos* identificaría la lucha de los francmasones contra la Iglesia con el germen del gótico.

<sup>2226</sup> MITJANA DE DOBLAS, 1845, p.164.

<sup>2227</sup> CAVEDA, J., 1848, p.161.

<sup>2228</sup> ROGENT, Elías *Arquitectura medieval en Cataluña*, 1857, p.15.

<sup>2229</sup> ARRECHEA, J. 1989, P.162.



Vilanova y Tubino<sup>2230</sup>. Ya bien ya bien entrada la etapa isabelina para asistir a una verdadera profesionalización de la Arqueología, con la creación de la Escuela Superior de Diplomática en 1856, donde se formarían los funcionarios encargados de recuperar y custodiar las antigüedades, accediendo la clase media a los estudios renovadores de la arqueología, dejando de ser una actividad exclusiva de los estamentos nobles y eclesiásticos. La arqueología clásica tendría una nueva revisión en las revistas románticas decimonónica, heredera en cierta manera de los debates arquitectónicos-arqueológicos de la Ilustración, en la que siguió siendo un referente las teorías de Winckelmann<sup>2231</sup>. Como apunta Juan Calatrava *pese a las nuevas y entusiastas valoraciones de la arquitectura medieval, el legado de Roma pasó igualmente a formar parte de ese gran patrimonio histórico a defender ante el avance del rodillo del moderno materialismo*<sup>2232</sup>. Se despojaría a la arquitectura romana de una superioridad frente a los otros periodos, pero al mismo tiempo, *logra aparecer, por el contrario, perfectamente nacionalizada e integrada en el catálogo de los heroicos restos materiales de nuestros pasados*. Nacía por consiguiente la conceptualización científica del patrimonio histórico, aunque no hubo una delimitación entre las obras artísticas y los objetos arqueológicos, al no existir una división perfectamente definida entre la historia del arte y la arqueología.

## **1.2. La reforma institucional del sistema administrativo del Patrimonio Monumental.**

### **1.2.1. Un primer ensayo institucional en la Década Moderada (1844-1854): Las Comisiones de Monumentos Históricos-Artísticos.**

La interrupción de las medidas desamortizadoras que se estaban discutiendo en el seno de las Cortes dio lugar al mismo tiempo a una incipiente conciencia patrimonial sin precedente que fue cuajando en la promulgación de una serie de disposiciones que tendría como culminación la génesis del primer sistema institucional administrativo español sobre protección del Patrimonio Monumental, resultado de los ensayos que se habían realizado en etapas anteriores. Cabe destacar en este sentido el debate producido en el Congreso de los Diputados, entre el Ministro de Hacienda y algunos diputados, que nos ayuda a comprender el estado de la cuestión en este momento sobre la verdadera valoración que se le dan a estos inmuebles. En la apelación del

---

<sup>2230</sup> No obstante, ya encontramos unos antecedentes desde los siglos XVI y XVII, época en que cabe citar a figuras trascendentales como Antonio Agustín, Rodrigo, Ambrosio de Morales. Durante la etapa borbónica se crea la Real Academia de la Historia, concretamente en 1737, que controlará el estudio de las Antigüedades, a las que se sumarán las Sociedades de Amigos del País, destacando relevantes personalidades como el deán Manuel Martín, Trigueros, el Marqués de Valdeflores o Juan Agustín Cean Bermúdez. Cfr. ARCE, J. y OLMOS *Historiografía de la Arqueología y la Historia Antigua en España (siglos XVIII-XX)*. Madrid, 199, 1. En el caso de Andalucía, BELTRÁN, J. y GASCÓ, F., *La antigüedad como argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía*.

<sup>2231</sup> MORA, G. *La arqueología en las revistas de arte del siglo XIX* en AA.VV. *Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*, pp.161-170.

<sup>2232</sup> CALATRAVA, Juan, 2005, p.205.

Ministro volvemos a encontrarnos una vez más con la exaltación de los valores nacionales representando en estos bienes enajenados, como aparece reflejado en el siguiente texto: *¿Y era posible que el Gobierno de S.M. consistiese los males que se estaban causando, sin tratar de remediarlo no ya por los intereses materiales, sino por la conservación de nuestra arquitectura, por la conservación de estos monumentos, que son la historia de muchos siglos? testimonio de nuestra civilización y de nuestra gloria. Cuando en Francia, en Alemania, en Italia se está tratando de recomponer, de conservar todo lo que existe, y se da a esto tanta importancia, como efectivamente la merece el conservar tantas glorias, ¿iríamos nosotros a consentir esa destrucción, esa especie de vandalismo? Consíéntase eso enhorabuena en tiempos de revolución; pero tolerarlo en estos tiempos era un absurdo, era un contrasentido, era un cargo al Gobierno?* La réplica del diputado Peña y Aguado nos induce a pensar el problema de base del destino de este patrimonio: los de claramente económicos y los de superación de la dependencia que se vislumbra todavía con respecto al Papado, por lo que en cierta manera no existía una apreciación definida de los valores históricos que representaban: (...) *La cuestión se puede considerar bajo tres aspectos diferentes: primero, bajo el aspecto constitucional, que es de mucha gravedad, pues ofende la principal prerrogativa del Parlamento. Segundo, bajo el aspecto político, pues va a producir grandísima alarma en el país, porque se va a creer que es el principio de la devolución y del restablecimiento de las comunidades religiosas, y eso, además de producir descontento en todo el partido liberal, produciría doble alarma en los compradores de bienes nacionales, pues ven que van a venir a esas casas los inquilinos a quienes correspondían los demás bienes.* Nuevamente, el Ministro replicaría con un claro mensaje proteccionista de los bienes históricos, que en definitiva significaba el patrimonio conventual: (...) *El Gobierno no podía permitir que cuando en la Europa entera conserva con esmero los monumentos artísticos que dan importancia al país y mantienen los recuerdos de sus glorias, los nuestros se estuviesen destrozando como ha sucedido hasta el día. Esta destrucción es la que procura evitar libertando a esos edificios de la ruina y del martillo revolucionario que predica el Sr. Peña Aguayo y no hace muchos días que ha salvado de este modo la Cartuja de Jerez, San Cucufate del Valle, San Pedro de Arlanza (...), y otra porción de edificios de reconocido mérito e importancia. Si se me acusa por haberlos salvados, yo me glorio de haber infringido la Ley en esto, aunque no la he infringido verdaderamente. Cuando la Junta de Monumentos Artísticos haya elegido los que deben conservarse; cuando el Gobierno haya destinado los que puedan ser útiles para edificios públicos, con lo cual resultara una grande economía, pues no habrá que pagar inquilinatos, entonces propondrá lo que debe hacerse (...).* En este discurso se observa ya la percepción de un argumento conservacionista que empieza a cuajar en algunos sectores de la opinión pública, pudiendo así buscar un verdadero crédito político.

Durante el mes de abril de 1844 el Ministerio de Gobernación, con su titular Peña florida, con la promulgación de la **Real Orden de 2 de abril de 1844** se pidió a todos los gobernadores civiles que enviasen al Gobierno una relación de los edificios nacionales que por su mérito artístico o por sus recuerdos históricos mereciesen conservarse. Esta Real Orden no incorporaba

novedades sobre el débil (pero no escaso) entramado legal que pretendía acabar con el expolio de los bienes desamortizados. Tampoco la respuesta obtenida trae novedades: toda la información coincidía en la extrema situación de penuria del patrimonio histórico y artístico español. En el contenido de la disposición nuevamente se expresaba el espíritu de tutela pública que el Gobierno Moderado intentó impregnar a todos los edificios que había pertenecido a las comunidades religiosas y otras corporaciones suprimidas, y que habían pasado a dominio del Estado. Como fundamento de la tutela pública se volvería a utilizar el valor estético e histórico, al referirse *que existen algunos cuya belleza es la admiración de los inteligentes, ó que encierran en su recinto monumentos que por más de un título son dignos de respeto y consideración*. Nuevamente el objetivo primordial, como había ocurrido en etapas anteriores sería salvar a estos bienes de su destrucción, apelando para ello a la exaltación de los valores nacionales: *Desgraciadamente la mano de la revolución y de la codicia ha pasado por muchos de ellos, y ha hecho desaparecer tesoros artísticos que eran la gloria de nuestra patria; y deseando la Reina que se salven de una vez los restos preciosos que todavía quedan*. Con este objetivo se dispuso que en el término de un mes se informase al Ministerio de todos los edificios, monumentos y objetos artísticos, de cualquiera especie que sean, *bien por la belleza de su construcción, bien por su antigüedad, por su origen, el destino que han tenido ó los recuerdos históricos que ofrecen, merezcan ser conservados*. Al mismo tiempo, se obligaba a los Jefes Políticos que se informase a los artistas y personas que residan en esa provincia, y que puedan suministrar datos útiles ó dar su voto en la materia. En un plazo de dos o cuatro meses las provincias enviaron las respuestas correspondientes, siendo la nómina de edificios a proteger muy reducidos<sup>2233</sup>. Casi todas las provincias contestaron en un plazo de dos o cuatro meses, con la excepción de las de Barcelona, Vizcaya, Zamora, Granada, Málaga, Navarra, Salamanca y Canarias. Uno de los informes mejor elaborado fue el procedente de Cádiz<sup>2234</sup>. Anteriormente a esta disposición se conoce en el caso hispalense un oficio del gobernador eclesiástico fechado el 5 de enero de 1844 para aplicar el decreto sobre la formación de los inventarios de objetos artísticos, tanto aquellos que estaban destinados al culto como los ornamentales. Sin embargo, como surgiere Isabel Ordieres no se pudo realizar esta tarea con soltura debido al excesivo volumen de bienes que había que catalogar y en muchos momentos no existiría un personal preparado para ello, por lo que en muchos casos en un principio desistieron de esta tarea. Cabe señalar que algunos pudieron seleccionar algunos bienes y enviar sus resultados investigadores a la Administración Central, que supuso sin duda alguna la génesis de una verdadera concienciación del problema<sup>2235</sup>.

---

<sup>2233</sup> BELLO, Josefina, 1997, p.266.

<sup>2234</sup> BELLO, Josefina, 1997, pp.267-268.

<sup>2235</sup> ORDIERE, Isabel *Historia de la restauración monumental en España (1835-1936)* Madrid, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1995. p.46.

En el Seminario Pintoresco Español del 11 de agosto de 1844 aparece reflejado la poca de la medida: *Fatal ha sido para las bellas artes la revolución, que acaba de arrostrar la España. Desde las últimas talas del guerrero Almanzor, hasta el presente, quizá no señale nuestra historia otra devastación semejante, aun cuando se tenga en cuenta los destrozos causados por las tropas francesas durante la guerra de la Independencia. En vano los amantes de las glorias nacionales clamaban porque se pusiese un dique al vandalismo, y nuestro modesto periódico fue de los primeros que levantaron su voz en este sentido, y ha clamado en él incesantemente, en épocas en que la palabra conservar era blasfema y sospechosa. La voz de la razón se perdía entre el vértigo y el estruendo de las pasiones políticas, las más innobles por lo común de todas las pasiones. Hablábse sin cesar de proteger las artes, cual si consistiera esto en lavana e indigesta palabrería, al paso que hacía gala en destruir los monumentos artísticos más notables (...) Penetrado al fin el gobierno de estas verdades ha mandado por Real Orden, fecha 2 de abril del presente año, a todos los Gefes Políticos, que remitiesen por término de un mes, una nota de todos los edificios, monumentos, objetos artísticos, de cualquier especie que sean, que han pasado a dominio del Estado, y que bien por la belleza de su construcción, bien por su antigüedad, por su origen, por el destino que ha tenido, o por los recuerdos históricos, merezcan ser conservados, a fin de que en por su vista se adopten las medidas convenientes (...) Además con fecha de 14 de junio del presente año, viendo con dolor los ninguno resultado de la Real orden de abril, se apresuró a manifestar al Gobierno cuan monstruoso era, que mientas unas oficinas reunían datos para la conservación de los edificios y monumentos dignos de conservación, se apresurasen otras a enajenarlos sin hacer caso de las reclamaciones de los pueblos y de las corporaciones científicas (...) A pesar de ser el Seminario ajeno a la política, sin ninguna mira de este género, tributamos también nuestros humildes elogios al Gobierno, tanto por la real orden de abril, como por la creación de la Junta, que debe entender este particular*<sup>2236</sup>.

Por fin, mediante **Real Orden de 13 de junio de 1844**, se decretaba la creación de la Comisión Central de Monumentos y las Comisiones Provinciales dependientes de aquella, siendo dictada por Pedro José Pidal, Ministro de la Gobernación y, Antonio Gil de Zárate, Director General de Instrucción Pública, por lo que se institucionalizaba por primera vez en la legislación estatal el problema de la protección jurídica de los bienes de carácter histórico-artístico. La Comisión Central estaría presidida por el Ministerio de la Gobernación y formada por un Vicepresidente y cuatro Vocales, todos Académicos numerarios de la Historia y de las Bellas Artes de San Fernando, teniendo como primer encargo la redacción del Reglamento de las Comisiones publicado en Real Orden de 24 de julio de 1844<sup>2237</sup>. Sería dividida en tres

<sup>2236</sup> El texto aparece insertado en Seminario Año IX, Tomo II, Núm.32, 11 de agosto de 1844, pp.249-250.

<sup>2237</sup> TORTOSA, T., MORA, G. *La actuación de la Real Academia de la Historia sobre el Patrimonio Arqueológico: ruinas y antigüedades*. Archivo Español de Arqueología, 69, 1996, pp.191-217. La primera formación de la Comisión Central estaría compuesta por Serafín María de Soto, Conde de Clonard, Vicepresidente, José Amador de los Ríos, Secretario y cinco vocales: Martín Fernández Navarrete, José de Madrazo, Antonio Gil de Zárate, Valentín

secciones, la de Bibliotecas y Archivos, que se puso a cargo de Martín Fernández Navarrete; la de escultura y pintura y la de arqueología y arquitectura por lo que se empieza a desglosar tres tipos diferentes a proteger: El Patrimonio Bibliotecario y Archivísticas; el Patrimonio de Bienes Muebles (Pinturas y Esculturas) y la Arqueología se integraba todavía con la Arquitectura. Como Secretario de la Comisión Central de Monumentos se nombraría a Amador de los Ríos. Las nuevas Instituciones sustituirían a las antiguas Juntas Científicas y Artísticas, que habían sido creadas en 1837. Aunque se acababa de crear el primer sistema nacional de protección del patrimonio histórico y artístico de España, las Comisiones tendrían una clara limitación administrativa impuesta por el propio Gobierno para asegurarse de su control: el Gobernador Civil sería obligatoriamente su presidente, no tendrían poder ejecutivo sino que serían auxiliares de la administración. Al principio las Comisiones dependerían del Ministerio de la Gobernación, para pasar posteriormente al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, creada en enero de 1847, que desde el 29 de octubre de 1851 pasó a denominarse Ministerio de Fomento, al entrar como ministro Mariano Miguel de Reinoso, para desde esta fecha pasar a depender de la Dirección General de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento. El día 7 de agosto de 1844 se constituiría la Comisión de Monumentos de Sevilla siendo nombrado presidente el Marqués de la Motilla y vicepresidente el deán López Cepero. En una de sus primeras secciones celebrada en el mes de septiembre serían nombrado los miembros de las respectivas secciones, correspondiendo la de archivo y bibliotecas a José de la Cova y al Marqués de la Motilla, la de escultura y pintura al señor Carvajal y don Vicente Casajús y la de arquitectura a López Cepero y Carvajal, nombrándose como responsable del museo a Antonio Cabrál Bejarano<sup>2238</sup>.

Muy interesante son **las Instrucciones del 24 de julio de 1844** que tenían que observar las comisiones provinciales de monumentos. Consta de 34 artículos, divididos en tres capítulos: 1. De la organización de las Comisiones; 2º. De los trabajos de las Comisiones y 3º. De las obligaciones de los Alcaldes respecto a las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos. Reforzamiento del papel de los Alcaldes Las tres Secciones en que se articulaba dichas Comisiones, configurarían los tres tipos de bienes que se consideraban como parte del patrimonio nacional. El primero se ocuparía del patrimonio archivístico, con una clara alusión nacionalista: *formación de los*

---

Cardedera y Aníbal Álvarez, quienes fueron los primeros que se encargaron de redactar la primera Instrucción o Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos. NAVARRETE MARTINEZ, Esperanza, *La Comisión Central de Monumentos y la Comisión de Monumentos en Biblioteca de arte, arquitectura y diseño: perspectivas actuales*. Barcelona, 1993.

<sup>2238</sup> RAMOS SUAREZ, Manuel Antonio, *Patrimonio Cultural y Desamortización. Marchena 1798-1901*. Diputación de Sevilla, 2008, p.235.



*archivos y de las bibliotecas, cuidando de aumentarlos con los manuscritos y obras que vayan adquiriéndose* (art.1). La Segunda Sección estaría dedicada a los bienes muebles que se contendrían en los Museos de pinturas y esculturas, y finalmente la Tercera Sección, donde claramente se ve un interés específico por el patrimonio arqueológico, probablemente una de las primeras medidas que encontramos en la tradición legislativa española: *Cuidará de promover excavaciones en los sitios en donde hayan existidos famosas poblaciones de la antigüedad; excitando el celo y patriotismo de los eruditos y anticuarios; recogerá cuantas monedas, medallas, noticias y otros objetos antiguos que puedan encontrarse, los clasificará oportunamente* (...). En el artículo 25 se establecía una serie de medidas sobre los edificios monumentales: *Siempre que algún edificio se halle en mal estado, e interese a las artes y a la historia el conservarlo, propondrá las Comisiones, oyendo a la Sección Tercera, los medios de repararlo para que sean elevados al conocimientos del Gobierno por el jefe político.*

No podemos dejar de comentar el malestar que supuso en el seno de la Real Academia de la Historia la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos, al ponerse en peligro las atribuciones que se le tenían encomendadas por Ley en la Inspección de Antigüedades. De ahí que la Academia nombrara una Comisión formada por Martín Fernández Navarrete, Marcial Antonio López, Barón de Lajoyosa, Pedro Sabau y José de la Canal para la elaboración de una exposición a la Reina para recordar cuales eran que le había sido otorgado a la Academia a través de distintas medidas legislativas sobre la conservación de monumentos, ya que incluso no se había contado para la configuración de las Comisiones con su opinión. Se solicitaba que *desde la bondad y la especial protección que V.M la dispensa, y de la ilustrada política de su Gobierno, no duda en expresar confiadamente que se dignará conservarle la inspección que se le está concedida sobre todos los ramos de su instituto, disponiéndose que se le pasen los trabajos y proyectos de las corporaciones creadas y de las autoridades de las Provincias por dar sobre todo el informe conveniente al Gobierno con arreglo a lo dispuesto en las leyes y órdenes vigentes, o declarando que para la mayor facilidad y celeridad de los trabajos de la Academia sea la Comisión Central nombrada crear en el artículo 9º de la citada orden de 13 de junio último con las atribuciones contenidas en el 10, que son en sustancia las que ya tienen por las leyes referidas, y con la facultad de cooperar por medio de sus Académicos correspondientes en las provincias, con las autoridades, corporaciones y personas nombradas por ellas* (...). Se estaba solicitando que las atribuciones de la Comisión Central fuesen transferidas a la Comisión de Antigüedades<sup>2239</sup>. Sin embargo, se desestimó dicha petición por la Real Orden de 16 de agosto de 1844, siendo Ministro de Gobernación, Pedro José Pidal, aludiendo a que *para impedir la pérdida total de tantas preciosidades, para recoger las que se han extraviado, y darles en nuevos museos y bibliotecas el destino que exigen las necesidades intelectuales de los pueblos; ha tenido que desarrollarse la acción administrativa del Gobierno buscando medios y agentes que no eran antes*

<sup>2239</sup> MAIER, J. 2003, p.39.



*necesarios(...)En nada menoscaban, pues, por la Real Orden del 13 de junio las atribuciones de la Academia: lícito le será siempre ejercer sobre las antigüedades de España aquella ilustrada inspección tan propia de sus luces; oportuno también y conveniente que eleve al Gobierno cuantas observaciones le sugiera su celo acerca de tan interesante punto; el mismo Gobierno se propone consultarla siempre que de resultado de los datos y noticias recogidas por las comisiones necesita adoptar algunas medidas importantes; y esa ilustre corporación, conservando así el carácter elevado y científico que le corresponde sin descender a pormenores de ejecución que no son propio de su naturaleza y que acabarían por serle ingratos, cumplirá con lo que la nación espera de ellas(...)*<sup>2240</sup>.

No cabe duda que el papel de la administración local en la tutela del Patrimonio Monumental se refuerza en la **Real Orden del 24 de junio de 1844**. Su capítulo 3 se va a dedicar a las obligaciones que los alcaldes de los pueblos van a desempeñar con respecto a las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos, por la que se establecerían unas importantes disposiciones en materia de conservación como era el suministro de noticias, la conservación de los bienes históricos y artísticos, con los medios que tuviese a su alcance, retener todo objeto de sospechosa procedencia, recoger todos los fragmentos y objetos arqueológicos que se descubriese en su término, expresando el lugar donde fueron hallados, vigilar el Patrimonio de las Iglesias y conventos, estimular a los hombres estudiosos que residen en sus pueblos para que se dedicaran a estos trabajos. Sin embargo, como precisan Yáñez y Lavín a pesar de que una gran parte muy importante de las actividades relacionadas con la protección, difusión e investigación del Patrimonio Histórico se delegara en los órganos municipales, el celo de los Ayuntamientos no debió de ser excesivo, por lo que fue promulgada la Real Orden de 7 de diciembre de 1849, recomendando el cumplimiento de las Instrucciones dadas en la Real Orden de 24 de junio de 1844. En ella se dispondría que *las numerosas reclamaciones que han dirigido a este Ministerio (Comercio, Instrucción y Obras Públicas) muchas de las Comisiones de Monumentos Históricos establecidas en las provincias sobre el abuso introducido por los Ayuntamientos de despojar los antiguos monasterios y edificios célebres, privándolos de portadas, columnas, verjas y otros objetos artísticos, con el malentendido celo de hermosear los paseos, sitios públicos y aún obras de moderna construcción de las poblaciones (...)*. Finalmente, el Real decreto de 13 de agosto de 1844 se paralizaba definitivamente la venta de los bienes eclesiásticos.

Un espíritu de defensa y salvaguarda del patrimonio artístico conventual irían impregnando los nuevos órganos tutelares como podemos apreciar en el discurso inaugural de la Comisión de monumentos y artísticos de León: *Al extinguirse las comunidades religiosas, legaron a la humanidad la historia de la ciencia y de la sabiduría, los frutos y esfuerzos de la inteligencia humana, depositados en sus ricas bibliotecas que en mayor o en menor escala y en más o*

---

<sup>2240</sup> MAIER, J., 2003, pp.39-40.

menos multiplicados volúmenes sirvieron un tiempo para formar hombres eminentes, virtuosos y humanos (...) <sup>2241</sup>o en el **Discurso inaugural pronunciado por el Sr. Conde de Clonarden** la instalación de la comisión central de Monumentos históricos y artísticos se volvería a resaltar la importancia de salvaguardar estos bienes: *Deseoso el Gobierno de salvar la destrucción que por todas partes amenazan a los más preciados monumentos de nuestra antigua gloria y de poner coto al vandalismo y la rapiña, que para mengua de nuestro nombre se ha ejercido sobre ellos hace algunos años, no ha titubeado, siguiendo el ejemplo de otras naciones, en adoptar los medios que ha creído oportunos para conseguirlo. No es este el lugar de hacer recriminaciones contra el espíritu revolucionario que ha echado por tierras tantos y tan apreciables monumentos de las artes españolas, ni debe limitarse la comisión a hacer solamente estériles reclamaciones. Si España ha visto por desgracia destruidos algunos de los más importantes edificios, que eran en otro tiempo su orgullo y que podían servir de guía para ilustrar su historia; si han desaparecido de nuestro suelo estatuas, cuadros, códices y otros objetos dignos de conservación y de estudio, también otros reinos vecinos han tenido que lamentar iguales pérdidas. La lista de los monumentos de todas clases que en la época de su terrible revolución desaparecieron del suelo francés hasta para probar que en medio de nuestros trastornos, en medio de nuestras convulsiones políticas ha habido, no obstante, más templanza y ha producido resultados menos funestos el fanatismo de la muchedumbre. Creo, señores, que todos estamos animados de un mismo sentimiento, y que no tendremos en nuestras tareas, que acusarnos de falta de voluntad ni de ardor; todos estamos interesados en las glorias artísticas de nuestra patria, porque todos somos españoles, y porque las glorias de las artes inflaman siempre los corazones generosos* <sup>2242</sup>. En el debate producido en las Cortes el 15 de abril de 1845 referido a las medidas gubernamentales de la suspensión de las ventas de los conventos, volvería a resaltarse la importancia de defender aquellos bienes inmuebles que se consideraran dignos de protegerse: Moyano se referiría a la importancia de conservar el patrimonio conventual desamortizado: *¿Y era posible que el Gobierno de S.M. consistiese los males que está causando, sin tratar de remediarlos, no ya por los intereses materiales, sino por la conservación de nuestra arquitectura, por la conservación de esos monumentos, que son la historia de muchos siglos, y testimonio de nuestra civilización y de nuestra gloria? Cuando en Francia, en Alemania, en Italia y otras Naciones se está tratando de recomponer, de conservar todo lo que existe, y se da a esto tanta importancia, como efectivamente la merece el conservar tantas glorias, ¿iríamos nosotros a consentir esa destrucción, esa especie de vandalismo? Consíéntese eso enhorabuena en tiempos de revolución; pero tolerarlo en estos tiempos era un absurdo, era un contrasentido, era un cargo al Gobierno. Por su parte, Alejandro Mons: El Gobierno no podía permitir que cuando la Europa entera conserva con esmero los monumentos artísticos que dan importancia al país y mantienen los recuerdos de sus glorias, los nuestros se estuviesen destrozando como ha sucedido hasta el día. Esta destrucción es la que procura evitar liberando estos edificios de la ruina y del martillo revolucionario, y no hace muchos días que ha salvado de este modo la Cartuja de Jerez, San Cucufate del*

<sup>2241</sup> Aparece publicado en Gaceta de Madrid, núm.3759, 29/12/1844, p.3.

<sup>2242</sup> Aparece publicada en la Gaceta de Madrid, núm.3582, 05/07/1844, pp.2-3.

*Vallés, San Pedro de Arlanza, San Juan de Ligena, monumento célebre en Huesca, y otra porción de edificios de reconocido mérito e importancia. Cuando la Junta de Monumentos artísticos hayan elegidos los que deben conservarse; cuando el Gobierno hayan destinados los que puedan ser útiles para edificios públicos, con lo cual resultará una grande economía, pues no habrá que pagar inquilinato, entonces propondrá que deben hacerse de los que queden, y mientras tanto ésta decidido a llevar a cabo la medida de suspensión*<sup>2243</sup>.

En líneas generales podemos considerar que la labor de estas Comisiones aunque no fueron lo eficaces que en un principio se esperaban de ellas<sup>2244</sup>, no cabe duda como señala González-Vara que uno de sus mayores logros fue sin duda alguna la posibilidad de hacer posible *el despegue de la política gubernamental para la restauración en España*. En cierta manera, el hecho de que funcionasen algunas Comisiones se debió más al celo de muchos de sus componentes, como fueron los casos de Almería o Tarragona, ya que muchas de estas Comisiones nunca llegaron a contestar los informes pedidos por la Central. En el caso de la Comisión Central, hubo una amplia actividad desde sus primeros pasos gracias a las gestiones de su Secretario General, José Amador de los Ríos, quien escribió una amplia y exhaustiva Memoria del primer año de su funcionamiento, la *Memoria Comprensiva de los trabajos verificados por las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos del Reino desde 1º de julio de 1844 hasta igual fecha de 1845*, podemos apreciar en una primera lectura una amplia actividad, pero se paralizaba por la actitud de muchas Comisiones Provinciales. Y es que su gestión estuvo obstaculizada por varias circunstancias que frenó una verdadera política administrativa, que entre ellas podemos señalar: 1º) El papel del propio Estado que en cierta manera no convirtió como política primordial la salvación del patrimonio expoliado, más aun cuando en la propia Constitución no se contemplaba la promoción cultural como una de sus obligaciones. Probablemente esta fue una de las causas principales que no existiera un corpus legislativo coherente, existiendo solamente una heterogeneidad de normas inconexas, que surgían solamente para resolver problemas inmediatos. De ahí que las Comisiones en muchos momentos estuvieron desatendidas en sus acciones; 2º) El problema de la financiación de las comisiones, ya que según el artículo cuarto de la Real Orden establecía que los gastos tenían que asumidos por fondos provinciales, que en muchos casos no llegaron ni a existir. La mayoría de las diputaciones

---

<sup>2243</sup> Diario de las Cortes, Núm.108, Sesión del martes 15 de abril de 1845, p.2088.

<sup>2244</sup> En este sentido como anécdota podemos referirnos a las palabras de Fermín CanellasSecades, miembro de la Comisión de Monumentos de Oviedo, haciendo una apología de su funcionamiento hacia 1874, que en realidad nunca fue real: *Las Comisiones de Monumentos no atesoran y esconden el arte para conservarlo, sino que plegadas a las exigencias de la vida moderna, conservan el arte para su estudio, auxilian la industria que practica el arte y atienden a la administración pública en lo concerniente a sus locales*". (Cfr. PEREZ-CAMPOAMOR MIRAVED, Enrique *La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Oviedo. Su papel en la consolidación de la arqueología asturiana* en MORA, Gloria; DIAZ-ANDREU, Margarita, Málaga, 1997, p.251).

provinciales no concedieron a sus comisiones ni un local donde reunirse, y las inversiones financieras fueron escasas, siendo la primera partida de solo 53.000 reales. A veces los presupuestos aprobados al ejecutarse tardíamente quedaban desfasados por el incremento de los precios o por haber avanzado el deterioro de los edificios por lo que tenía que volverse a programar; 3º) El intenso peso burocrático a la hora de proceder a realizar la gestión, al establecerse que cada tres meses, las Comisiones tenían que entregar al Ministerio de la Gobernación un resumen de los trabajos realizados, como se contempla en el artículo 8º, por lo que dejaban atadas todas las acciones propias de las Comisiones Provinciales, La lentitud con que se cursaban los expedientes de conservación y reparación (práctica típica de la administración decimonónica en general, denunciada por Larra en uno de sus artículos) dificultó una acción rápida y coherente que hubiese salvado a muchos bienes en peligros en este momento. Además se recomendaba en la ejecución de estas prerrogativas, la actuación de los alcaldes de los pueblos, que tenían como deber suministrar la información pedida por las Comisiones, ayudándole para ello el cura párroco, y además se recomendaban que estimulasen *a los hombres estudiosos que residan en los pueblos de su jurisdicción para que se dediquen a estos trabajos*. A ello cabría unir la falta de superioridad jerárquica de la Comisión Central sobre las provinciales, como aparece reflejada en la propia R.O. de 13 de junio de 1844: *La Comisión Central no tendrá autoridad sobre las provinciales*. Pero es que estas últimas tampoco tenían un poder ejecutivo, sino que eran puramente consultivos, al establecerse que *no procederán a operación alguna ni harán gastos, de cualquier especie que sean, sin expresa autorización del jefe político, quien consultará al Gobierno siempre que el objeto lo merezca por su importancia*. 4º) Relacionado con lo anterior, el propio personal encargado de realizar estas gestiones poseía una parca formación científica, ya que muchos de ellos formaban parte más de las filas políticas que del mundo cultural, ya que la mayoría eran perteneciente al mundo de la abogacía, del estamento eclesiástico, o de la propia aristocracia, por lo que se contaba un reducido número de arquitectos, escultores, alegando la mayoría de ellos para la pertenencia a las distintas Comisiones, su afición a las Artes y a las antigüedades, o incluso conocimiento de numismática<sup>2245</sup>. Un hecho significativo es que la recompensa material para los responsables de ejecutar estas medidas era la concesión de unas menciones honoríficas, que en muchos casos quedaban en un simple testimonio verbal por lo que no había una

<sup>2245</sup> Muy explícita al respecto son las palabras de Rodríguez Pascual sobre los componentes de estos primeros miembros de las Comisiones Provinciales: *las (...) hubieran sido sin duda de gran eficacia, llevando a las provincias una acción que, confiada solamente a la Academia de la Historia, no podía llegar a ella con la debida intensidad; pero nacieron con un vicio de origen, pues siendo nombrados sus individuos por los Jefes Políticos y diputaciones, sin otro requisito que el de ser personas inteligentes y celosas, vinieron a convertirse en una rueda mas de la complicada maquinaria administrativa, sin efectividad práctica por falta de interés y competencia en sus vocales*. Cfr. RODRÍGUEZ PASCUAL, Ramón "La protección a las antigüedades" *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1914, pp.378.

verdadera recompensa material, que alegaba un verdadero entusiasmo a la hora de desarrollar su labor.

5º) No existe una fundamentación clara a la hora de seleccionar el patrimonio a proteger, especialmente debido a la falta de rigor científico, que como ya apuntamos en su momento, en estos años todavía no se había configurado plenamente la historia del arte y la arqueología. La mayoría de los edificios que se intentaron salvaguardar pertenecían al patrimonio conventual exclaustrado, lo que no quita alguna apreciación por los restos del mundo cultural clásico, que ya habían tenido un significativo capítulo desde la etapa de la Ilustración, o los pertenecientes a la Edad Media, aunque de estos últimos se apreciaba una amplia carencia de conocimientos. Todavía en estos años se despreciaría por las Comisiones Provinciales su interés por el estilo árabe, a pesar del mal estado de conservación que se encontraba algunas de sus más importantes joyas, como la Alhambra, o en el caso del arte judío, que fue literalmente ignorado. Si debe de citarse el interés que comenzó a despertar el arte asturiano, que ya Jovellanos en el siglo XVIII había comenzado a interesarle en sus investigaciones. Este hecho hizo que muchas de las Comisiones como las de Canarias, Málaga, Pontevedra o Vizcaya, llegaban a sugerir la inexistencia de bienes históricos susceptibles de ser conservados. Incluso cabe mencionar los pocos edificios renacentistas que se insertaron en estas primeras Memorias, y el gran desprecio que se le daba al barroco, al considerarse un periodo de decadencia de las artes, por lo que se perdieron muchas obras artísticas de considerable valía. Por tanto, la selección patrimonial se dejaba al arbitrio de los miembros que componían la Comisión. En 1851, Josep M. Quadrado, miembro de la Comisión de Monumentos de las Baleares, ya criticaría la poca eficacia de estas Comisiones: *Faltas de prestigios y de recursos, al menos las comisiones de provincia, que de la central crearemos que así no sea, ¿Qué edificio han logrado arrancar al furor o a los cálculos del vandalismo? ¿Qué riguroso fallo suspender? ¿Qué golpe parar del hacha destructora? ¿Qué gotera remendar, si a expensas propias no ha sido? ¿qué socorro tender a su desvalida grandeza o hermosura?*<sup>2246</sup>. Rodríguez Pascual, haciendo alusión a la legislación española en materia de antigüedades señala que *Las Comisiones provinciales hubieran sido sin duda de gran eficacia, llevando a las provincias una acción que, confiada solamente a la Academia de la Historia, no podía llegara a ellas con la debida intensidad; pero nacieron con un vicio de origen, pues siendo nombrados sus individuos por los Jefes Políticos y Diputaciones, sin otro requisito que el de ser personas inteligentes y celosas, vinieron a convertirse en una rueda más de la complicada rueda administrativa, sin efectividad práctica por falta de interés y competencia en sus vocales*<sup>2247</sup>.

---

<sup>2246</sup> QUADRADO, J.M. *Dos palabras sobre demoliciones y reformas* Palma de Mallorca, 1851, p.9.

<sup>2247</sup> RODRIGUEZ PASCUAL, R., 1914. p.378.



A pesar de estas críticas palabras no podemos negar el hecho de que ya en su primer año, la Comisión Central elaboraría una lista de edificios que debía ser conservado por su carácter artístico e histórico, que ascendían a cerca de trescientos, por lo que se pudo evitar la destrucción del yacimiento arqueológico de Clunia en Burgos, el Hospital de San Marcos en León o la venta de la Cartuja de Jerez, y se dieron las dos primeras declaraciones monumentales: la Catedral y San Marcos de León, por parte del Estado, que se comprometía a mantenerlo y restaurarlo. En los primeros días de septiembre de 1845 sería presentada la Memoria de la Comisión general de Monumentos respecto a los trabajos que habían emprendido y llevado a cabo las comisiones de monumentos de todas las provincias del Reino en cumplimiento del párrafo 4º, artículo 10º de la Real orden de 13 de junio de 1844, expresando los obstáculos que iba encontrar la propia Comisión, y que lo acompañaría toda su existencia, *por lo que hubiera querido ofrecer al país y a la consideración de V.E. más brillantes resultados, abriga sin embargo la esperanza de que verá V.E. con satisfacción los que hasta ahora se han alcanzado, resultados de tanto más difícil logro, cuanto eran mayores, los obstáculos que se han encontrado en todas partes, y el abandono en que habían estado los asuntos sometidos a su inspección y cuidado*<sup>2248</sup>. Se puntualizaba el impacto negativo que había producido las guerras carlistas sobre el patrimonio: *En unas partes la guerra civil sostenida por la nación contra las tropas de Don Carlos había sido causa de que se consumasen actos de tan extraños vandalismos, que no juzga conveniente recordarlos estas comisiones; en otras habían sustraídos algunos religiosos las obras más importantes en el momento de verificarse la supresión de los conventos; en otras habían sido asaltados los depósitos formados por las comisiones encargadas anteriormente de estos trabajos (...). No presentaban mejor aspecto los trabajos de la sección 2º, encargada en el establecimiento de los museos de pintura y escultura; y sin embargo, puede decirse que la mayor riqueza artística del país se hallaba depositada bajo las bóvedas de los claustros y en las iglesias de los conventos y monasterios (...) En ninguna parte había tantos objetos de esta especie como en aquellos retiros que la piedad de nuestros padres había enriquecido con pingües donaciones, debiendo por tanto esperar el Gobierno de S.M. y la nación, como consecuencia de las Reales órdenes que acordaban la supresión de las comunidades religiosas, que aquellos desconocidos tesoros concurriesen a ilustrar el siglo con olvidadas lecciones e ignoradas doctrinas (...) Las producciones pues de todos estos grandes artistas y de estas afortunadas*

<sup>2248</sup> La Memoria de la Comisión Central apareció publicada en la Gaceta de Madrid en diferentes números: Gaceta de Madrid, n.4055, 21/10/1845, p.4; Gaceta de Madrid, núm.4052, 18/10/1845, p.3; Gaceta de Madrid, núm.4051, 17/10/1845, p.2; Gaceta de Madrid, núm.4049, pp.3-4; Gaceta de Madrid, núm.4048, 14/10/1845, pp.2-3; Gaceta de Madrid, núm.4047, 13/10/1845, pp.3-4; Gaceta de Madrid, núm.4046, 12/10/1845, p.3; Gaceta de Madrid, núm.4044, 10/10/1845, pp.2-3; Gaceta de Madrid, núm.4043, 09/10/1843, pp.2-3; Gaceta de Madrid, núm.4041, 07/10/1845, p.3; Gaceta de Madrid, núm.4040, pp.2-3; Gaceta de Madrid, núm.4039, 05/10/1845, pp.3-4; Gaceta de Madrid, núm.4038, pp.3-4; Gaceta de Madrid, núm.4036, 02/10/1845, pp.3-4; Gaceta de Madrid, núm.4035, 01/10/1845, pp.3-4; Gaceta de Madrid, núm.4034, 30/09/1845, pp.3-4



*épocas no pudieron menos de servir para aumentar el número, crecido ya, de las preciosidades de este género que guardaban en su seno los conventos y monasterios. Casi todos aquellos ingenios dedicaron la mayor parte de sus vidas a enriquecer los claustros y las iglesias (...) En vista de todos estos antecedentes, que suministraba la historia de las artes, la comisión central abrigaba la esperanza de que contaría cada provincia, si no con un museo establecido, al menos con un depósito de cuadros tal que bastase para erigirlo. La revisión de los expedientes le manifestó tristemente lo contrario. Solo algunas provincias, como tendrá V.E. de observar en la exposición de los trabajos consumidos por las comisiones de monumentos, habían tenido la fortuna de llevar a cabo los deseos de S.M. manifestando explícita y terminantemente en las Reales órdenes de 29 de julio y 18 de noviembre de 1835, 14 de diciembre de 36, 27 de mayo del 37, 13 de julio del 42 y otras, que por evitar proligilidad, pasa la central en silencio. Hallábase en unas partes amontonados los pocos lienzos que habían podido salvarse de la incuria, la ignorancia y la rapacidad, despertada en mal hora por los extranjeros que, viendo la ocasión de enriquecer sus museos fácilmente, sacaron a despecho de la Real orden de 5 de septiembre de 1836 del suelo español mucha de su principal riqueza. En otras partes habían parecido en los usos más viles muchas de las preciadas creaciones, que eran la gala y ornamento de las más suntuosas iglesias, y en otro finalmente apenas se tenía noticia de que se hubiesen recogido en el momento de la exclaustación de los regulares, ni formado siquiera inventarios de esta clase de objetos. No podía entre tanto desorden convencerse la comisión central de que hubieran desaparecido absolutamente tantas preciosidades como debía encerrar la nación española, consagrada por el espacio de muchos siglos a enriquecer con dádivas piadosas aquellos monasterios y conventos (...). Un primer respaldo oficial del trabajo de la Comisión vendría a raíz de la promulgación de la **Real orden de 10 de septiembre de 1845** disponiendo que se manifieste el agrado con que S.M. se ha enterado del celo, interés y perseverancia que emplea la comisión general de monumentos y mandando a imprimir la memoria que ha presentado. Todavía en la sesión del 27 de enero de 1845 el diputado Pedro Egaña denunciaba en las Cortes como las ventas de los conventos seguían siendo una práctica usual<sup>2249</sup>.*

¿Cómo se cumplió estas disposiciones nacionales a nivel local? El caso de Marchena. La primera ley que cumplió el Cabildo Municipal en mayo de 1844 fue señalar los edificios que debían conservarse dados sus méritos artísticos, por lo que se solicitaron la conservación de los edificios de Santo Domingo y San Francisco, ya que los propios vecinos habían invertido veinte mil reales en la reparación del tejado del templo. Sin embargo, el convento franciscano pasaría a manos de un propietario particular, Manuel Sevilla, el 3 de junio de 1844, incluido el propio templo conventual, lo que causó esto último una gran indignación vecinal, por lo que el propio Ayuntamiento comenzó a realizar una serie de gestiones para que pudiese ser conservado fuera de las manos de los particulares, habiendo presentado el 24 de mayo de 1844 un recurso en el Juzgado de Primera Instancia, siendo desestimado. A raíz

---

<sup>2249</sup> Diario de Sesiones, 27 de enero de 1845.

del mismo, y por la indignación popular que se produjo, se hizo llegar el caso al intendente provincial, que a su vez, elevaría la petición a la propia Reina, pidiendo que se suspendiera la compra del inmueble. En el Cabildo Municipal del día 8 de junio se defendió que la iglesia conventual se había solicitado como ayuda de la parroquia. Al mismo tiempo, Manuel Sevilla, arrendaría el inmueble conventual, incluido la iglesia, a Antonio y Juan Serrano, el 12 de julio de 1844, por el precio de mil reales, dándole carta de libertad para hacer lo que quisiese en el templo. El Ayuntamiento siguió gestionando a fin de que fuera devuelto la iglesia, contestando por fin la Intendencia de la Provincia en su sección de ventas de Bienes Nacionales su incompetencia para rescindir un contrato perfecto y consumado, que comprendió la Iglesia que se reclamaba y contra el que nada se dijo ni se alegó en tiempo hábil, al corresponder a autoridades superiores. Sin embargo, en abril de 1845 se suspendería el derribo de la iglesia del convento franciscano, debiéndose informar sobre el asunto el Ministerio de Gracia y Justicia, trasladándose al vicario y al Ayuntamiento animándolos a pedir a la Reina la rescisión de la venta respecto a la iglesia, por lo que por Orden del 2 de mayo del mismo año, se dispuso que la iglesia se excluyese de la venta a favor de Manuel Sevilla, debiéndole abonar la parte proporcional de su valor la Administración de Bienes Nacionales. Unos meses después, vendería a Francisco de Paula Montiel el inmueble conventual, en un momento en que aparecía publicada la ley de 21 de julio de 1845, que obligaba a efectuar los reparos del templo a su cuenta, por lo que no es de extrañar que por ello vendiera el inmueble. Se instruyó un expediente reconociendo el estado del templo, que se desplomaría por el estado ruinoso que presentaba la noche del 9 de noviembre de 1845. En febrero de 1846, el Ayuntamiento recibiría un comunicado del administrador de los Bienes Nacionales informándole que la iglesia había pasado a formar parte del Estado, provocando su subasta el día 2 de octubre de 1848 recayendo en Luis Manuel de la Pila, por lo que el 13 de enero de 1849 compraría el antiguo templo franciscano, que uniría a otros templos de la provincia que habían pertenecido a otras órdenes religiosas, quizás por el cargo que ostentaba, jefe honorario de la administración en Sevilla<sup>2250</sup>. En los últimos años se ha incrementado los estudios de la actividad de las Comisiones Provinciales, como la Alicante<sup>2251</sup>.

### **1.2.2. Una reforma institucional del Patrimonio Monumental en la etapa del Bienio Progresista (1854-1856): La Reorganización de las Comisiones de los Monumentos.**

En el ámbito de la protección del Patrimonio Monumental, como apunta Javier Rivera las medidas desamortizadoras de Madoz *desanduvo mucho de lo avanzado, pues gran número de los edificios protegidos hasta entonces quedaron de*

<sup>2250</sup> RAMOS SUAREZ, Manuel Antonio, 2008, pp.258-266.

<sup>2251</sup> BALSALOBRE GARCÍA, Juana María, Comisión de Monumentos, Alicante, desamortización y tiempo de colecciones, en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M<sup>a</sup> DOLORES, *Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en la España de los siglos XVIII y XIX*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp.145-165.

*nieve expuestos a su venta y posterior transformación y demolición por reducirse la consideración de los que eran importantes y de los que el Estado solo impediría su exoneración cuando estimara que concurrían razones graves para ello*<sup>2252</sup>. Hacia 1854, el panorama de la acción de las Comisiones Provinciales era desolador, ya que más de una veintena habían desmontado su organización y ni siquiera la Comisión Central confeccionaba la Memoria que debía confeccionar anualmente<sup>2253</sup>. La falta de eficacia de la Comisión aparece plasmada en algunos textos del historiador balear José María Quadrado: *Falta de prestigios y recursos, al menos las comisiones de provincia, que de la central creemos que así no sea, ¿Qué edificio han logrado arrancar al furor o a los cálculos del vandalismo? ¿Qué riguroso fallo suspender? ¿Qué golpe parar del hacha destructora? ¿Qué gotera remendar, si a expensas propias no ha sido?*. La reforma llegaría con la promulgación del Real Decreto de 15 de noviembre de 1854, siendo Ministro de Fomento, Federico Luxán, en cuyo Exposición de Motivos ya se refiere a la necesidad de atribuir un nuevo papel a la Comisión Central: *era indispensable determinar con precisión sus atribuciones, harto vagas y generales; darles mayores ensanches; relacionarla de un modo directo con las Comisiones Provinciales; procurar a éstas un centro de unidad y de acción, y prevenir desde luego los graves daños que podían seguirse de reducirlas al aislamiento (...)*. Como precisa Isabel Ordieres, *esta reorganización se interpretó como que el Gobierno buscaba ya en la Comisión Central, no sólo una institución erudita que determinase el valor de estos monumentos, sino un brazo auxiliar de la Administración que protegiera y vigilara de cerca su buena conservación, proponiendo al Gobierno cuantas medidas fuesen oportunas para contener su destrucción presente y futura (...)*. La Comisión Central estaría formado por un Presidente, que sería el Ministro de Fomento, un Vicepresidente, un secretario con voz y voto y una dotación actual de 12.000 reales, un oficial con el sueldo de 7.000 reales y seis vocales de carácter honorífico. Por consiguiente, la Comisión Central se convertía en el verdadero instrumento administrador para resolver todos los problemas que se pudieran presentar en la gestión de la conservación del patrimonio, especialmente aquellos que habían sido expoliados en el mercado (art.1). Sin embargo, una vez podemos subrayar que la acción administrativa de la Comisión Central sobre la tutela del Patrimonio Monumental solamente se referían a bienes públicos, y no a los que se encontraban insertado en el dominio privado, por lo que principio un gran número de bienes quedaban fuera de la protección estatal. A la Comisión Central se le reforzaba sus atribuciones como podemos comprobar en la propia Exposición de Motivos: *El estado de los edificios públicos que debe conservarse, las reparaciones que reclaman y los sacrificios indispensables para preservarlos de una próxima ruina, ha venido a demostrar que la Comisión Central, no solamente ha de ser un cuerpo facultativo, sino también un agente directo del Gobierno, que a la ciencia debe reunir la acción y el pensamiento la autoridad necesaria para realizarlas en muchos casos; que es en fin, un Cuerpo auxiliar de la Administración Pública en uno de los ramos más importantes confiado en su cuidado.*

---

<sup>2252</sup> RIVERA, Javier, 2001, p.97.

<sup>2253</sup> LOPEZ TRUJILLO, M.A., 2006, p.214.

Una lectura detenida de las atribuciones asignadas a este órgano estatal, subraya el carácter público de los bienes integrados en el Patrimonio Monumental. De esta manera la Comisión Central tendría como primera atribución reunir y conservar en el mejor estado posible todo los que habiendo correspondido a las órdenes religiosas y demás corporaciones suprimidas, son hoy de la pertenencia del Estado (art.2), al mismo tiempo que indagar el paradero de los objetos históricos y artísticos *que se hayan extraviados y pertenezcan al Estado* (art.12.1), por lo que entendemos que aquellos bienes que estuviesen en la esfera privada quedaría ajeno a esta protección. En el ámbito de la restauración inmobiliaria, la Comisión Central tendría como misión *promover la restauración de aquellos edificios, propiedad de la nación o de los pueblos, que se encuentren en estado ruinoso, y sean de un verdadero precio para las artes y para la historia* (art.12.2), por lo que en principio los inmuebles históricos en manos privadas quedaban ajenos de la gestión de esta institución, al mismo tiempo que promovería ante el Gobierno *aquellas gestiones que crean necesarias para evitar las restauraciones inoportunas de las fábricas monumentales, y el mal uso que de ellas pueda hacerse con perjuicio de su buena conservación* (art.12.6). Si algunos de los inmuebles históricos públicos concedidos para usos de utilidad pública hubiesen sido deteriorados, la Comisión Central podía denunciarlo (art.12.7), e incluso en el caso de que se pretendieran enajenarlos o demolerlos, podía *hacer las oportunas reclamaciones* (art.12.8). Otras atribuciones que se darían a la Comisión Central estaría relacionado con la propia organización administrativa de la tutela pública del Patrimonio Monumental, como el dar unidad y dirección a los trabajos de las comisiones provinciales, auxiliándolas con sus luces (art.12.3); Cooperar al mejor éxito de sus tareas alentando su celo, y procurando remover los obstáculos que puedan tropezar en el ejercicio de sus funciones (art.12.4) y Contribuir eficazmente a la mejor organización de los museos, bibliotecas y archivos que estas han creado (art.12.5). Sin embargo, las atribuciones centralistas que se le otorgaría a la Comisión Central no sobrevivirían al fin del Bienio Liberal., ya que por la Ley de la Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 sería suprimida tal institución, al ser sustituida su labor por la Real Academia de San Fernando.

### **1.2.3. Un ensayo frustrado de la centralización administrativa de la tutela del Patrimonio Monumental en el periodo de la Unión Liberal (1856-1866).**

Con la publicación de la **Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857**, la conocida con la denominación de Ley Moyano, se reforzaría el papel de la Academia de San Fernando de Madrid, ya que en su artículo 161 se establecía que *se pondrá al cuidado de la Real Academia de San Fernando la conservación de los monumentos artísticos del reino y la inspección superior del Museo Nacional de Pintura y Escultura, así como las*

*de los que debe haber en las provincias; para lo cual estarán bajo su dependencia las comisiones provinciales de monumentos, suprimiéndose la Central. Hasta 1879 no se cumpliría definitivamente esta medida, pero no cabe duda de que significaba un respaldo al papel que las Academias iban a juzgar en la política proteccionista del Estado. En la Memoria de la Real Academia de San Fernando leído por su secretario Eugenio de Cámara dejaba constancia del nuevo papel institucional: le encomendó la misma ley de Instrucción pública otras más análogas a su carácter e instituto: el artículo 161 declaró suprimida la Comisión central de Monumentos Históricos y artísticos disponiendo su incorporación a la Real Academia de Nobles Artes, y que todas las comisiones provinciales del ramo quedasen bajo su dependencia, encargándose además de la inspección del Museo Nacional y de los provinciales. En virtud de esta importante disposición y de lo mandado en consonancia con ella por la Real orden de 18 de enero de 1859, se verificó la incorporación de la citada comisión central a la Academia en febrero del mismo año, pasando a su Secretaría todo el personal de la de aquella, y haciéndole entrega formal de todos los papeles y efectos que a ella pertenecían. La Academia revisó el Reglamento por el que hasta entonces se había regido la Comisión suprimida, acordó y propuso a la aprobación del Gobierno de S.M. las variaciones que eran necesario introducir en él: nombró a los individuos de su seno que habían de componer la nueva, que fueron dos por cada una de sus tres secciones de Pintura, Escultura y Arquitectura bajo la presidencia inmediata de un Consiliario, y siendo su Secretario el general de la Academia, y se celebró por fin la instalación solemne de la nueva Comisión en su sala de Juntas el 18 de mayo de dicho año 1859. Poco pudo hacer por el pronto la reciente Comisión, y la marcha de sus negocios, ya estacionada de algún tiempo atrás por causas inevitables e independiente de la voluntad de los dignos individuos de aquella, algunos de los cuales lo eran también de la nueva, continuo paralizada todavía mientras se vencían las dificultades materiales con que se luchaba, y que era consecuencia natural del cambio sufrido en su organización. Las comisiones provinciales, compuestas de personas de ilustración, conocidas por su inteligencia, celo y amor a las Artes, y presididas por los respectivos Gobernadores, se dedicaban por lo general con poca asiduidad a promover los negocios de su incumbencia, lo que no es de extrañar, si se atiende que el cargo de vocales de ellas es puramente honorífico y gratuito, a que siempre ha sido escasísimo y a veces casi nulos los fondos que podrá disponerse para la reparación y conservación de los monumentos, y estos aunque se prescindiese, como siempre ha habido que prescindir, de costosas y delicadas restauraciones, y por último, a la poca frecuencia de sus reuniones, consecuencia precisa de las muchas y variadas atenciones que pesan sobre los Gobernadores, y de la facilidad con que se mudan estos importantes funcionarios<sup>2254</sup>. Hasta 1859 la Real Academia de Bellas Artes no recibiría el control definitivo de la Comisión Central.*

La controversia entre los papeles de ambas Academias se intentaría superar con la configuración de la llamada Comisión Mixta, que en un principio se denominaría Comisión de Correspondientes y posteriormente,

---

<sup>2254</sup> Resumen de las actas y tareas de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, en el periodo transcurrido desde 1º de enero de 1857 hasta fin de agosto de 1864, leído por el secretario general don Eugenio de la Cámara.



Organizadora de las Provinciales de Monumentos<sup>2255</sup>. La nueva Comisión redactaría el nuevo Reglamento, que sería aprobado por el **24 de noviembre de 1865**, siendo Ministro de Fomento, el Marqués de la Vega Armijo, que sin duda alguna significó un verdadero hito en la reforma administrativa de la política proteccionista del Estado. Se *nombraría* un nuevo modelo de Comisión, que estarían formados por miembros de la Academia de la Historia y de San Fernando, quedando las comisiones provinciales bajo el control de la Academia, siendo presidida por los gobernadores provinciales<sup>2256</sup>. Desde ahora la Comisión estaría formada por cinco correspondiente de ambas academias, los más antiguos de cada provincia. Las Comisiones de Monumentos asumirían un gran número de obligaciones como fueron: 1º) La conservación y restauración de los monumentos históricos que fueran de propiedad del Estado; 2º) El cuidado, la mejora, el aumento o la creación de los museos provinciales de Bellas Artes; 3º) La dirección de las excavaciones arqueológicas que en cada provincia se conceptuaren necesarias para la ilustración de la historia nacional; 4º) La creación, aumento y mejora de los museos de antigüedades (art.17.4); 5º) La adquisición de cuadros, estatuas, lápidas, relieves, medallas y cualesquiera otros objetos que por su mérito o importancia artística e histórica merezcan figurar, tanto en los museos de bellas artes, como en los arqueológicos; 6º) La investigación, adquisición o compra de códices, diplomas, manuscritos y cualquier otro documento que pueda contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica, así en lo artístico como en lo político, religioso, etc. (art.17.6); 7º) El examen de los archivos existentes aún en las oficinas de la Hacienda Pública, ya con el propósito de señalar los documentos que deben pasar al Archivo Nacional formado por la Real Academia de la Historia, ya con el fin de ilustrar la de los monumentos artísticos confiados a su custodia; 8º) El reconocimiento facultativo y arqueológico de los monumentos públicos con el intento de precaver su ruina y evitar al propio tiempo que se hagan en ellos restauraciones impropias de su carácter y que menoscaben su mérito artístico; 9º) La custodia y decorosa conservación de los sepulcros y enterramientos de nuestros reyes, príncipes y hombres ilustres, y la traslación o restauración de los que, por haber sido enajenado los edificios donde existan o por su mal estado de conservación, lo exigiere y 10º) La intervención en las obras públicas que se hicieren, ya con fondos municipales o provinciales, ya sea a expensas del estado, en despoblados antiguos, en las inmediaciones de las grandes vías romanas o en otro cualquier lugar que ofrezca indicio de construcciones respetables, a fin de evitar la pérdida o sustracción de los

<sup>2255</sup> Estaría formada por Aníbal Álvarez – que a los pocos meses sería sustituido por Narciso Pascual y Colomer- y José Amador de los Ríos, por la Academia de San Fernando y Antonio Delgado, Modesto Lafuente y Carlos Ramón y Fort, por la Academia de la Historia.

<sup>2256</sup> Un estudio a nivel local de la implantación del Reglamento de 1865 a nivel provincial, MARTÍNEZ PINO, Joaquín, *Las Comisiones de Monumentos a partir del Reglamento de 1865. La provincia de Murcia, en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M<sup>a</sup> DOLORES, Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en la España de los siglos XVIII y XIX*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp.209-223.



objetos artísticos o arqueológicos que pudieren descubrirse. De la lectura de este artículo se deduce algunas novedades con respecto a disposiciones anteriores. Se detecta un mayor interés por el patrimonio arqueológico, aunque todavía no está perfectamente delimitado, producto de los avances que la investigación científica estaba teniendo estos momentos, así como la previsión de fundar museos de antigüedades y museos provinciales de Bellas Artes, actividad que ya se estaba desarrollando en toda la geografía española. Por otra parte, se puede apreciar como la Real Academia de la Historia asumió plenamente todo lo concerniente al Patrimonio Arqueológico, especialmente especificado en el artículo 25, que establece que *ninguna Comisión podrá proceder a ejecutar excavaciones sin el previo conocimiento y aprobación de la Real Academia de la Historia, a menos que circunstancias muy especiales las autoricen al efecto*. Como apunta Maier, quedaba cumplida aquella pretensión de que la protección y conservación de las antigüedades debía de realizarse a través de la inspección de la Real Academia de la Historia. El ámbito del Patrimonio Documental comenzaría a tener cierto protagonismo, al contemplarse la protección de los archivos, aunque con una clara tendencia nacionalista. Es curioso que siga siendo vital como una de sus obligaciones la conservación de los sepulcros reales, que ya había sido insertado en disposiciones anteriores.

El Reglamento se completaría con una serie de medidas novedosas, como la vinculación que tendría desde este momento la Comisión con las Academias de Bellas Artes y los gobernadores civiles, como aparece plasmada en el Título II. Con respecto a la relación con los gobernadores civiles, se plantea en principios a las Comisiones Provinciales como un órgano consultivo, como preceptúa el artículo 19.1: evacuar los informes que el gobernador le pidiese sobre el mérito e importancia de los monumentos artísticos que debían de conservarse o restaurarse en la provincia de su cargo, aunque en el artículo 20 se establece que el Gobernador no puede dictar resoluciones sobre la materia ni llevarlas a ejecución sin oír a las Comisiones, aunque en la práctica no se cumpliría este requisito. Sin embargo, van a gozar de una mayor autonomía administrativa en las siguientes cuestiones, como aparece reflejado en el artículo 21: *Podrían las Comisiones provinciales de monumentos usar de la iniciativa, respecto de los gobernadores: 1º. Para reclamar contra las restauraciones o modificaciones proyectadas en los edificios públicos y que alteren su carácter histórico o adulteren sus formas artísticas. 2º. Para representar contra la inmediata enajenación, demolición o destrucción de los monumentos de verdadero mérito e interés nacional, cualquiera que sea el pretexto que se alegare al intentar su ruina. 3º. Para proponer la pronta reparación de aquellas construcciones de mérito artístico que siendo propiedad de la provincia o del Municipio, no ofrecieren seguridades de duración. 4º. Para evitar que sean extraídos indebidamente de los Archivos de Hacienda pública aquellos documentos que por su índole histórica deben formar parte de los generales del Estado. 5º. Para impedir que los objetos de arte que en cualquier concepto pertenezcan al Estado y cuya posesión importe a la*

*historia de la civilización española, sean enajenados a los extranjeros. 6º. Para proponer la adquisición de cuadros, estatuas, relieves y cuantos objetos de arte o de antigüedad creyeren dignos de conservarse, evitando, en cuanto fuere compatible con el derecho de la propiedad el que dichos objetos salgan del territorio español. 7º. Para atender a la adquisición, ya por permuta, ya por otros medios, de aquellos objetos que, siendo propiedad de las iglesias, y de verdadero interés artístico o histórico, no tengan ya aplicación al servicio del culto. 8º. Y por último, para proponer cuanto juzgaren conveniente a los fines de instituto y estuviere en sus atribuciones.* Como se puede apreciar existen dos importantes novedades en el ámbito administrativo: el doblaje conceptual del patrimonio en el ámbito jurídico, al distinguirse por un lado el interés histórico del monumento y por otro el interés artístico, dualidad que se proyecta en el papel que van a poseer ambas Academias, y al mismo tiempo el reforzamiento de la idea nacionalista al considerar como fundamento de conservación en el interés de su historia y arte. Ya en otras páginas comentamos como el derecho de propiedad sigue siendo un obstáculo a la iniciativa pública en la conservación del patrimonio. Al mismo tiempo se reforzaba el papel de las autoridades públicas, especialmente a los gobernadores civiles y a los alcaldes. Entre las obligaciones que se le encomendaron estarían la de coadyuvar con las Comisiones en sus reconocimientos locales en cumplimiento de sus obligaciones; auxiliar a los individuos de las Comisiones, en visitas anuales, obras de excavación, recoger objetos arqueológicos para remitirlos a las Comisiones; Vigilar por la conservación de los edificios que hubiesen ya sido clasificados como monumentos artísticos y retener objetos antiguos de sospechosa procedencia dando cuenta a las Comisiones (art.43). Al mismo tiempo las Oficinas de Hacienda tendrían que facilitar la labor de las Comisiones en la formación del Archivo General formado por la Real Academia de la Historia. Las Diputaciones tenían que fraguar los gastos de conservación y restauración al mismo tiempo que los ayuntamientos siempre que fueran propiedad pública (art.46).

El papel adoptado por la Real Academia de San Fernando quedaba claramente reflejado en el artículo 22, al preceptuar las obligaciones que tenían que cumplir las Comisiones Provinciales respecto a esta: Evacuar cuantos informes le pidiese, someter a su examen y aprobación los proyectos de restauración de los edificios confiados a su celo, remitirle nota detallada de sus presupuestos y de sus inversiones, consultarle la creación y ampliación de Museos, darle conocimiento de las adquisiciones especiales de los Museos, remitirle cada tres meses un resumen de sus trabajos y resultados, proponer investigaciones para descubrir y recuperar objetos artísticos del Estado, que hubiesen pasado indebidamente a particulares o Corporaciones y elevar a la Real Academia los catálogos de los Museos de Bellas Artes, formados por los conservadores. Con respecto a la Real Academia de San Fernando, prácticamente se planteaba las mismas obligaciones, pero referente a los objetos arqueológicos y a los monumentos históricos, especialmente las

propuestas de excavaciones arqueológicas, la información de los descubrimientos fortuitos, la remisión de las notas sobre yacimientos encontrados al realizar obras públicas o informar sobre las noticias sobre documentos de interés, cuya adquisición fuese útil para el conocimiento de la historia nacional, como aparece recogido en el artículo 23. Se incluía además una tarea investigadora por parte de las Comisiones, que ayudara a conocer los bienes y artistas más importantes de cada provincia, con el objetivo de elaborar catálogos provinciales (Título III) y la configuración de museos provinciales, incitando a un aumento de sus fondos, que sería dirigido por un conservador nombrado por la Real Academia de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. El artículo 28 establecía las obligaciones que las Comisiones Provinciales de Monumentos tenían que asumir desde el punto de vista académico, especialmente la elaboración de inventarios y catálogos razonados de los bienes: *Correspondiendo a las Comisiones provinciales de Monumentos, además de sus funciones administrativas, la consideración de corporaciones verdaderamente artísticas-científicas, y estando sus individuos obligados por reglamento a contribuir a los trabajos de las Reales Academias, de que son correspondientes, consagrarán sus habituales tareas: 1º. A la formación de un catálogo razonado de aquellos edificios que existan en sus respectivas provincias y cuyo mérito artístico o importancia histórica los hicieren dignos de figurar en la Estadística Monumental proyectada por la Comisión Central de Monumentos. 2º. A la formación de un catálogo de los despoblados que en cada provincia existieren, y a la redacción de Memorias o monografías sobre los objetos artísticos y arqueológicos, que custodiaren en los museos de cada provincia, procurando clasificarlos y describirlos científicamente, ilustrándolos por medio de exactos diseños o fotografías. 3º. A la investigación y esclarecimiento de dudosos puntos históricos o simplemente geográficos, relativos al territorio que se extienden las atribuciones de cada Comisión, acompañando también a estos importantes trabajos los planos y demostraciones gráficas que se juzgaren convenientes. 4º. A la formación de biografías de pintores, escultores, arquitectos, orfebres y entalladores que más se hubieren distinguido en cada provincia por sus obras artísticas, atendiendo con todo esmero a enriquecerlas con documentos inéditos o poco conocidos, y a ilustrarlas con diseños o fotografías de los cuadros, estatuas, relieves o edificios más notables de cada profesor.*

A pesar de las interesantes novedades que el Reglamento proporcionaba no cumplió con las expectativas, debido a que los miembros de las Comisiones en cierta manera no hicieron mucho caso de las tareas que le encomendaban las Academias y además la falta de inversión económica, que en muchos casos anularía su capacidad de intervención. Además cabe vez estarían más dividido los papeles de la Academia de la Historia y de las Bellas Artes, al preocuparse la primera solamente por el patrimonio arquitectónico y la segunda exclusivamente por el descubrimiento de obras de la antigüedad, que en cierta manera estaba comenzándose a distorsionarse dos conceptos diferentes de patrimonios: el histórico-artístico (especialmente el arquitectónico) y el arqueológico (especialmente los vestigios de la cultura romana). De ahí que la

propuesta que plantearía el Ministerio de Fomento sobre el proyecto de elaboración de una Ley sobre Excavaciones y Antigüedades con la solicitud de la Real Orden de 15 de abril de 1868, quedaría en suspenso, por lo que el sistema administrativo seguiría perfilado con la misma estructura hasta principios del siglo XX. Como apunta Isabel Ordieres es en el ámbito de la declaración de Monumentos donde se puede observar mejor la distorsión de papeles entre ambas instituciones, *daba la sensación en ciertos casos de no existir un discurrir paralelo de las dos Academias a la hora de abordar la conservación o restauración de un monumento, no sabemos si por desconocimiento de los que cada una realizaba, lo cual no es factible puesto que había muchos académicos que lo eran de las dos, o porque la mayoría de las veces se limitaban a informar las peticiones que les iban remitiendo, lo que hizo que cada uno tuviese su propio proceso*<sup>2257</sup>.

### **1.3. El régimen tutelar del Patrimonio Eclesiástico Monumental en el ámbito de los derechos patrimoniales en el periodo isabelino.**

Durante la España Isabelina asistimos a la consagración definitiva de considerar al Patrimonio Eclesiástico Monumental como bien de interés nacional, proceso que había sido iniciado desde la afrancesada, y que se había proyectado en los periodos iniciales del régimen liberal (Trienio Constitucional, Regencia de María Cristina). Sin embargo, el tratamiento tutelar por parte de la potestad pública por parte de estos bienes no van a ser homogéneo, sino que se va a depender del régimen patrimonial en que encuentre, por lo que no podemos perder de vista cual es el régimen patrimonial en que se encuentran los bienes eclesiásticos en el periodo isabelino. El derecho de la propiedad por parte de la Iglesia se convierte en uno de los ejes primordiales del debate en torno a la construcción jurídica del ordenamiento liberal en este momento, bien en el seno de los moderados como de los progresistas, por lo que nos encontramos con una etapa convulsiva en que por un lado se reivindica por parte de las filas del moderantismo un cese de las medidas desamortizadoras, que culminará en la celebración de los Concordatos de 1851 y 1859, y un incremento de expropiaciones eclesiásticas, que se vislumbra en el periodo del Bienio Progresista (1854-56), especialmente en la Ley Madoz de 1855. Las distintas medidas en torno al derecho de la propiedad de la Iglesia, no cabe duda que influirían en la tutela pública del Patrimonio Eclesiástico Monumental, al distinguirse una política tutelar distinta de aquellos bienes que habían sido desamortizados, o sea convertidos en bienes nacionales, y aquellos que habían seguidos en el seno de la Iglesia, y que como tal había que respetarse, aunque no por ello no estarían ajenos a un principio de intervención estatal. Estas controversias tanto doctrinales como legales existentes en el periodo isabelino en torno al derecho de la propiedad de la Iglesia van a tener una clara proyección en el seno de la tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico durante el periodo isabelino. De ello se va a derivar una serie de cuestiones primordiales a la hora de generar un verdadero sistema normativo

<sup>2257</sup> ORDIERES, Isabel, 1995, p.86.

público de protección, especialmente en la cuestión de la titularidad, en la propia configuración del bien jurídico a proteger y en la acción de la institucionalización administrativa que va a nacer en este periodo como continuación de los experimentos realizados en los regímenes del primer liberalismo. En el régimen titular se va a ir configurando dos grupos de bienes diferenciados: 1º) Aquellos que a raíz de las medidas desamortizadoras han sido adquiridos por el Estado convirtiéndose en Bienes Nacionales, incorporándose a las colecciones públicas de la red de instituciones museísticas y archivos que se van a ir fundando por toda la geografía peninsular; 2º) Aquellos que siguen en el ámbito del régimen patrimonialista de la propia Iglesia, cuya tutela pública quedaría más limitada que la anterior, al considerarse bienes insertado en la esfera privada de la Iglesia, por lo que a raíz de la celebración de los Convenios de 1851 y 1859, la intervención del Estado quedaría diluida. Sin embargo, la identificación de los bienes históricos-artísticos religiosos (en su mayoría antiguos conventos, abadías, a las que se unirían catedrales, palacios arzobispales o algunos templos parroquiales) como bienes de valor nacional llevaron a ampliar su tutela pública, especialmente a raíz del Concordato de 1851, que abrió el camino para los primeros acuerdos institucionales entre el Estado y la Iglesia en la conservación del rico patrimonio histórico-artístico, que había constituido en los últimos siglos. Al mismo tiempo, se iría fraguando una política de restitución de la propiedad de algunos bienes a la Iglesia, con fines espirituales, bajo la tutela del Estado en el ámbito de la restauración, lo que originaría un amplio número de disposiciones normativas y 3º) Aquellos Bienes Conventuales que habían sido vendidos a particulares en principio, quedarían exentos de la tutela pública, al entrar a formar parte del dominio privado, por lo que la intervención pública quedaría diluida.

Derecho de la propiedad eclesiástica.	La tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico en el ámbito de los derechos patrimoniales.
Medidas desamortizadoras: los bienes expropiados se convierten jurídicamente en bienes nacionales.	Los bienes desamortizados de interés monumental se convierten en bienes de interés nacional: nace la institucionalización de los servicios públicos de los Museos y Archivos.
Política de devolución de los bienes eclesiásticos	Se reconoce a la Iglesia el derecho de la propiedad monumental eclesiástica,

### **1.3.1. Un ensayo frustrado de tutela del Patrimonio Conventual desamortizado como bienes nacionales.**

#### **1.3.1.1. Un nuevo capítulo de destrucción patrimonial del patrimonio conventual.**

El Estado va a heredar un problema trascendental de etapas anteriores, que ni mucho menos se había resuelto, e incluso en muchos momentos se iría



incrementando: el destino del Patrimonio Monumental Eclesiástico, que una gran parte de la misma había pasado a manos públicas, que al mismo tiempo eran vendidas a manos privadas. Las destrucciones masivas de los bienes eclesiásticos desamortizados de interés histórico-artístico despertaron gritos unánimes a fin de ser protegidos de la barbarie que la mala gestión de sus ventas, el desamparo ante las múltiples circunstancias adversas que se habían producido o la propia inercia de los poderes tutelares habían provocados. Así críticos como José Amador de los Ríos, se dirigiría al Ministro del Interior en estos términos: *Las artes y la historia estaban reclamando una medida tan ilustrada y en que tan vivamente se veía empeñando el buen nombre español; las artes y la historia exigían del Gobierno de S.M. que tendiera una mano protectora sobre sus despedazados monumentos, y cupo a V.E. dar cima a esta idea, deseoso de vindicarnos de las acusaciones que continuamente nos dirigen los extranjeros, fundados en nuestra proverbial indolencia.* En el Seminario Pintoresco Español de 1844 se declamaría contra la situación destructiva que se había realizado sobre los bienes del Patrimonio Monumental a raíz de las revoluciones liberales: *En medio de las irreparables pérdidas que a la riqueza monumental de España ha causado el espíritu vandálico de la codicia y la ignorancia, invocando falaz nombres sagrados, produce expansión en el ánimo la vista de cualquier creación de las artes salvada de la mano asoladora de la especulación y del egoísmo. En pocos años hemos vistos desaparecer monumentos, a cuya creación concurrieron acaso los esfuerzos y tendencias de sucesivas generaciones. ¿Dónde están, pues, las suntuosas obras, que a través de los siglos atestiguaban las fases de nuestra vida social, y eran el reflejo póstumo del espíritu y civilización de otras edades? ¿Qué se han hecho tantas maravillosas fábricas, inmensas páginas de piedra, donde la mano del tiempo hiciera la apoteosis del heroísmo, grandezay virtud de tantos y tan ínclitos varones? (...) Pues donde ha poco, se alzaban orgullosas y radiantes aquellas artísticas maravillas, hoy vemos la sombra de la ignorancia señoreándose fiera en un yermo de ruinas y depredación. ¿Y esto se ha hecho en nombre de la libertad? ¿Cómo holocausto a la civilización? Pero no. Esa es una obra de mercaderes sórdidos, que para saciar sus menguados instintos, se ha cubierto con una máscara de seguridad(...) Bien comprendemos que siempre hay exageraciones en tiempo de una revolución. Pero no pretendan los que han puesto su mano sobre las obras de Berruguete y Herrera hacer pasar por un tributo a las ideas, y un servicio a la causa pública, lo que fue no más un tráfico deplorable de fácil enriquecimiento. Ni quieran echar la odiosidad sobre una medida de gobierno acorde con el espíritu del siglo. Pues entre suprimir ciertas instituciones y destrozar el árbol de las artes en la relación que con ella puede tener, hay tanta diferencia como de la buena a la mala aplicación de un gran principio*<sup>2258</sup>.

José María Antequera da cuenta en 1885 de la destrucción acaecida en el ámbito del patrimonio monumental conventual en la ciudad de Madrid, que puede servir de ejemplo a lo que ocurrió en otros lugares de España: *¿Qué resultado había dado este enorme desbarate al llegar a este punto nuestra historia? Por desgracia son hartos conocidos. Centenares de iglesias y conventos habían venido a tierra, privando al público piadoso del asilo que en ellos encontraba. Solo en*

<sup>2258</sup> El texto apareció publicado en el Semanario Pintoresco Español, p.243. Núm.27, 8 de julio de 1849.



*Madrid se habían arrebatado al culto, destruido o destinados a usos profanos, cuarenta y cuatro iglesias y conventos. El hermoso e histórico monasterio de San Felipe el Real, los de la Victoria, de Afligidos, de la Pasión, de Agonizantes, de Santa Catalina de Sena, de Santa Ana, de San Bernardo y de las Baronesas, fueron derribados y levantadas sobre su suelo casas particulares (...) Solo diremos aquí que hasta 1845 se había apoderado el Estado de 2.120 conventos, de los que se han vendido ya 685 (...)*<sup>2259</sup>. En la provincia de Madrid se vendieron entre 1836 y 1845 un total de 672 propiedades urbanas pertenecientes al clero, entre los que se encontraban treinta conventos de la capital. El monasterio de Portacoeli y el de Clérigos Menores del Espíritu Santo fueron demolidos en 1845 para construir el Congreso de los Diputados. Ese mismo año el Senado ocupó el antiguo convento de Doña María de Aragón. El Monasterio de los Carmelitas fue utilizado para los despachos de la Oficina de Deuda Pública. El Monasterio de los mercedarios Descalzos se vendería al empresario José Bonaplata, instalando una fundición y una fábrica metalúrgica. El Noviciado Jesuítico sería derribado para instalar un mercado y un paseo público. Otros dos edificios conventuales servirían para ubicar el despacho de lotería del Estado y la Bolsa de Madrid. El Monasterio de los Trinitarios descalzos fue regalado a la Academia de Arte que lo utilizó para museo y aulas. Otros conventos serían donados por el gobierno a la propia nobleza, como fue el caso del duque de Medinaceli y el marqués de Legarda, cuyas familias habían regalado originariamente las propiedades a la Iglesia<sup>2260</sup>.

### **1.3.1.3. La cesión de los edificios religiosos desamortizados: Edificios Administrativos, Edificios de Cultos, Inmuebles de usos privados y Monumentos Nacionales.**

#### ***- Los bienes conventuales como edificios administrativos.***

Como apunta Josefina Bello la absoluta carencia de edificios destinados a fines públicos que padecía el Estado cuando se produjo la desamortización salvaría a muchos de ellos de su destrucción. Sin embargo, el uso que de ellos le iría dar los particulares quedaría regulado por una amplia normativa intentando salvaguardar la identidad artística de los antiguos edificios conventuales<sup>2261</sup>. J.M. Quadrado criticaría la reutilización o la transformación de los edificios en su conocido artículo titulado *Del vandalismo en arquitectura* que publicaría en 1851 en la revista *Seminario Pintoresco Español*, del que recogemos este fragmento: *Por eso tal vez a su cargo creyó deber tomarla el Gobierno, parado apenas el primer ímpetu revolucionario, creando bajo todos los nombres y formas imaginables, multitud de juntas arqueológicas y artísticas, salvadoras o conservadoras, que reparasen en lo posible los daños ya causados (...)*

---

<sup>2259</sup> ANTEQUERA, José María *La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones*, Madrid, 1885, Analecta Editorial, 2003, pp.223-224.

<sup>2260</sup> MARICHAL, Carlos *La Revolución liberal y los primeros partidos políticos españoles*. Madrid, 1980, Cátedra, p.280.

<sup>2261</sup> BELLO, Josefina, 1997, p.276.

*Pero el mismo número de ellas publica su ineficacia; y su existencia es tan nominal e ilusoria, que ha habido necesidad de recordarla a menudo para que no se creyese extinguida. Y no ciertamente por haber cesado los males y peligros para cuyo remedio se establecieron, o por fatales ocasiones de llenar su noble encargo: no ha pasado, no, la época de devastación y vandalismo que yermó nuestro suelo de bellezas y profanó los más gloriosos recuerdos (...) Ya no se hiere por lo general a nuevas víctimas; pero mueren de las heridas o de consunción las pocas que escaparon del fanatismo destructor. Los monasterios continúan arruinándose en los despoblados, o sirviendo de graneros; los edificios religiosos en el recinto de las ciudades se desmoronan lentamente si yacen abandonados, o pierden de pronto toda su fisonomía artística, y más tarde también su existencia si se destina a usos corrientes: en el primer caso mueren a manos del tiempo, a manos de hombre en el segundo. Apenas hay monumentos que no dependan del capricho de un particular el reformarlo o estropearlo; y ninguno hay del cual las autoridades locales, políticas o militares, no pueden echar mano en caso de apuro, incluyendo en estos la llegada de unas cuantas compañías más de lo regular, o el voto de un perito cualquiera, para demolerlo si estorba o amenaza ruina, para destinarlo a cuarteles, almacenes o usos semejantes, que convierten muy pronto en ruina al más sólido edificio, si promete aun ciertos años de vida<sup>2262</sup>.*

Una primera medida referente al destino de los bienes inmuebles desamortizados sería la **Real Orden del 17 de marzo de 1845**, que declaraba que la cesión de los edificios conventuales para utilidad pública se entendía como temporal: *He dado cuenta a la Reina de la consulta elevada por S.M. a este ministerio en 26 de junio próximo pasado acerca de que las cesiones gratuitas de edificios conventos hechas para objeto de utilidad pública sean y se entiendan todas temporales, conservando siempre el Estado su propiedad para disponer de ellos cuando no sea necesarios para los objetos a que se hubiesen aplicados, por lo que la Nación seguiría disfrutando de la misma, al mantenerse la propiedad absoluta sobre ella ha tenido a bien disponer que siempre que se cedan o hayan cedido gratuitamente conventos por motivos de conveniencia pública, se entienda que esto es temporalmente y con opción solo al disfrute de los mismos, conservando la nación la propiedad absoluta de ellos, bajo cuyo concepto no solo ha de ser obligación de sus concesionarios su conservación y las obras o reparos necesarios para los fines a los que apliquen, sino que cuando estos hubiesen caducados por cualquier causa, vuelva a incautarse de ellos la administración general de bienes nacionales como pertenecientes a la Hacienda, y a quien corresponde cuidar muy particularmente de que se cumpla lo mandado sobre el particular. En consecuencia, se establecería una serie de disposiciones en ara al buen uso del inmueble cedido: 1º. Que cuando un edificio-convento concedido se encuentre destinado a objetos diversos de los señalados por la concesión, los intendentes procederán inmediatamente a exigir de los concesionarios el alquiler que corresponda, sin perjuicio de tomar nuevamente posesión de la finca si así lo considerasen conveniente. 2º. Que hagan lo propio de*

<sup>2262</sup>Cuadrado, José María “De vandalismo en arquitectura”, *Semanario Pintoresco Español*, 47, 23/11/1851/p.375.

*aquellos que estén aplicados solo parcialmente al fin de la concesión, exigiendo en este caso el alquiler, o posesionándose nada más que de la parte aplicada a objetos diferentes. 3°. Que las oficinas de Hacienda recauden desde luego como de legítima pertenencia de la misma los inquilinatos devengados por conventos, cuando aquellos a quienes se han concedido por causa de utilidad pública han procedido a arrendarlos de su cuenta convirtiéndolos en objetos de especulación. Y 4°. Que todas las veces que se verifique o haya verificado que un edificio-convento gratuitamente adjudicado ha sido destruido en todo ó en parte, se instruya el oportuno expediente que se remitirá a la superioridad a fin de determinar lo que haya lugar en beneficio de los intereses públicos, y exigir la debida responsabilidad a quien corresponda.* Una vez que se caducase la cesión, el inmueble volvería a manos de la Administración Central. Las peticiones provinieron fundamentalmente de los propios Ayuntamientos que esperaban dedicar estos edificios a cuarteles y colegios. Cabe señalar que en la prevención cuarta se señalaba, aunque muy superficialmente, una supuesta responsabilidad de la conservación del inmueble ocupado por la entidad solicitante, por lo que se percibe ya un cierto interés por parte del Estado en la salvaguarda patrimonial.

Con la promulgación del **Real decreto de 11 de abril de 1845** sería desautorizada hasta nueva resolución la venta de los edificios-conventos de las comunidades religiosas suprimidas, formándose en cada provincia una lista de edificios, clasificándose en tres categorías: los que debían convertirse en monumentos, los dedicados a fines de utilidad pública y los destinados a la venta, por lo que todavía no se la venta de edificios religiosos no se consideraba definitiva. Dos días después, el 13 de abril de 1845, sería publicada la Resolución por la que se dictaría las disposiciones relativas al destino que se hubieran de dar a los edificios-conventos no enajenados, efectuando para ello *una clasificación general y ordenada de los mismos, con el fin de darles una aplicación definitiva acomodada a sus circunstancias (...)* por cuyo medio se logrará utilizarlos con ventaja, y sin verlos desaparecer sucesivamente y de manera tan lastimosa como estéril para la nación, conforme ha sucedido hasta ahora, procediendo or lo que con ello se estaba distinguiendo de aquellos bienes inmuebles que se convertían definitivamente en edificios públicos, bien para oficinas del Estado, bien para cuarteles, presidios, cárceles, casas de corrección o beneficencia, hospitales, escuelas, fábricas y otros establecimientos públicos, ó de conveniencia más o menos general, entre los que se encontrarían los monumentos históricos y artísticos y los que seguían considerándose consagrados al culto divino. Se procedería a establecer un procedimiento administrativo muy riguroso, siendo los *Intendentes del reino* los que procederían *inmediatamente a formar una lista nominal de todos los edificios-conventos que estén por enajenar en sus respectivas provincias y no se hallen habitados a la sazón por religiosas ni adjudicados definitivamente para objetos de utilidad pública á algún ramo ó corporación, incluyendo en ella aquellos que, aunque reúnan esta circunstancia, no hayan sido concedidos por este ministerio, y su actual destino deba mirarse en su consecuencia como meramente provisional (1°)*, oyendo

previamente a los jefes políticos, autoridades militares, eclesiásticas y otras cualesquiera así como a los ayuntamientos, comisiones provinciales de monumentos, sociedades económicas y demás corporaciones públicas, confeccionando una relación convenientemente clasificada, donde constara el destino particular que en su concepto debe darse a cada edificio-convento, ya se le considere propio para algún establecimiento del Estado, ya le estimen capaz de recibir un uso de utilidad común, como cuartel, presidio, cárcel, casa de corrección o de beneficencia, escuela, fábrica u otro análogo, ya le juzgue digno de conservación por su mérito arquitectónico, sus recuerdos, tradiciones u otras circunstancias especiales; ya en fin, le crean útil únicamente para ser puesto en venta pública, expresando al mismo tiempo su buen o mal estado, aplicación que en la actualidad tenga, ventajas que de él reporte o pueda reportar a la nación, valor aproximado, situación y demás particularidades que merezcan ser conocidas, así como si su iglesia se encuentra consagrada al culto y debe continuar de igual modo, o se le reclama como necesaria para este fin por quien corresponda (2º). La relación sería elevada al Ministerio de Hacienda por conducto de la Junta de Ventas, que emitirá sobre ella su dictamen, de acuerdo con la administración general de Bienes Nacionales; siendo el Gobierno quien decidiría lo que haya lugar acerca del destino o aplicación particular que debe darse a cada edificio-convento (3º), pudiendo entre tanto las autoridades y corporaciones, así como los particulares, dirigir sus peticiones al mismo ministerio en solicitud de los edificios-conventos que se reclamen con algún objeto público o privado de utilidad reconocida, ya gratuitamente, ya a censo, según las circunstancias y con arreglo a los decretos y Reales órdenes vigentes (4º). El Gobierno se reservaría establecer el sistema bajo el que se ha de proceder en lo sucesivo a la enajenación de aquellos edificios-conventos que absolutamente no sean susceptibles de otra aplicación; de modo que el Tesoro reporte de ella mayores ventajas que hasta el día (5º).

El debate celebrado en el Congreso de los Diputados el 15 de abril de 1845 abordaría en qué medida la suspensión de la enajenación perjudicaba a la economía nacional, ya que se consideraba que un gran número de estos inmuebles se habían malvendidos, y los que restaban estaban en una situación de ruina, por lo que el Gobierno no podía solventar el gasto de su reparación. La intervención del Ministro de Hacienda refleja hasta qué punto se había convertido para el Gobierno Moderado en un verdadero problema de Estado: *¿Tenía motivos el Gobierno para suspender esto? Si, Señores; grandes, poderosos, todos económicos (...) ¿Cuántos son los conventos de que se ha apoderado el Estado después que se han exclaustrado los frailes? El Estado se ha hecho cargo de 2.120 conventos. Y de éstos ¿En qué especies se han vendido? En libranzas protestadas, en cupones, y generalmente en deuda sin interés. ¿Qué es lo que se han producido en venta? Veintiún millones de reales (...) Vea el Congreso si el Gobierno podía permanecer indiferente acerca del método y forma de la venta y del destino que se están dando a estos edificios. He dicho que se habían vendido 685 conventos; se ha aplicado a diferentes objetos 605; quedan por vender 729 conventos, y éstos son aquellos cuya venta se han mandado suspender. El Gobierno se encuentra sin casas en que colocar sus oficinas. Por el alquiler del edificio que ocupa el Ministerio de la Gobernación se pagan 58.000 reales, y hoy día no hay otro sitio donde colocarse. Se está buscando un local para Bolsa de Madrid, y no se encuentra uno solo: se había*

*destinado el convento de San Felipe, el Real, pero se ha vendido, y ha desaparecido este sitio para el objeto. Se agrega a esto, señores, que el Gobierno últimamente había nombrado una Junta de monumentos artísticos, que comenzó a trabajar por las provincias para averiguar cuáles eran los monumentos que se conservaban y en qué estado se hallaban todavía, y no pasaba día que no vinieran reclamaciones de esta Junta anunciando que monumentos notables se iban a arruinar(...)¿Y era posible que el Gobierno de S.M. consintiese los males que estaban causando, sin tratar de remediarlos, no ya por los intereses materiales, sino por la conservación de nuestra arquitectura, por la conservación de esos monumentos, que son la historia de muchos siglos, y testimonio de nuestra civilización y de nuestra gloria? Cuando en Francia, en Alemania, en Italia y otras naciones se está tratando de recomponer, de conservar todo lo que existe, y se da a esto tanta importancia, como efectivamente la merece el conservar tantas glorias ¿iríamos nosotros a consentir esa destrucción, esa especie de vandalismo?. Las voces críticas al proyecto como la Peña y Aguayo apostarían por una solución más especulativa de aquellos edificios que tenían en propiedad el Estado y no podía dar una salida definitiva al problema ocasionado: En virtud de este decreto de suspensión, se reserva el Gobierno la propiedad de más de 1.200 conventos ¿Cuánto habrá que gastar en la reparación de esos edificios? ¿Cuánto se necesitará invertir cada año en cada uno de ellos, para que no sean dentro de poco tiempo montones de ruinas o asilos de malhechores? Esta consideración tienen que tenerla muy en cuenta el Gobierno. Una parte de esos edificios o acaso el mayor número de ellos están en un estado sumamente ruinoso. Téngase presente que a pesar de haber estado en el mercado público desde el año 37, y a pesar de esas circunstancias tan ventajosas con que se ha hecho las adquisiciones, según lo que nos ha dicho el señor Ministro de Hacienda, todavía no se ha vendido. Y esto ¿en qué consiste? En que los mejores ya se han enajenado y los otros nadie los quiere. Pues bien; en estas circunstancias, el Gobierno debía de estar interesado en que se vendieran; aunque se regalaran se ganaba mucho, porque más ventaja resultaría al país ver convertido en casas esos solares, que el que continúen como un recuerdo doloroso de nuestras intestinas discordias<sup>2263</sup>. Se concebía por parte del Gobierno que los edificios conventuales desamortizados podían paliar el problema de la carencia de inmuebles suficientes para poder alojar a la demanda de edificios públicos donde instalar las sedes de la administración. En la **Resolución de 31 de mayo de 1845** se mandaba que se instruyera un expediente general del estado en que tienen en la actualidad los edificios conventos no enajenados, y se exija la debida responsabilidad a quien corresponda de los destrozos o despojos que hubiesen sufrido. La lectura de esta Resolución ya nos da una prueba de la inquietud de pérdida patrimonial que se estaba produciendo en el ámbito gubernamental: Siendo de toda notoriedad que muchos de los edificios-conventos incorporados al Estado por consecuencia de la supresión de las comunidades religiosas han sido notablemente destruidos, o despojándoles del hierro o teja que contenían, o privándoles de las*

---

<sup>2263</sup> Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Núm.108, Sesión de Martes de 15 de abril de 1845, p.2091.



*puertas o ventanas que existían en ellos, o cometiendo otras depredaciones por semejante estilo, todo con el objeto de utilizar estos despojos, que han sido cometidos ya por personas mal intencionadas, ya por los mismos que estaban constituidos en el deber de mirar por la conservación e integridad de dichos edificios. De ahí que se instruya un expediente, dotando a los intendentes de los reinos de un papel primordial, por lo que tenían que tomar previamente cuantos informes estimen oportunos de los ayuntamientos, corporaciones o particulares de cada población a quienes crean deben oír, formarán una relación de aquellos que se encuentren en este caso, y evacuadas todas las diligencias necesarias consultarán a la superioridad lo que corresponda hacer en cada caso, e incluso se alude una cierta responsabilidad a quien en ella hubiese legítimamente incurrido.*

**- La transformación de los inmuebles conventuales desamortizados en cuarteles: La Real Orden de 12 de julio de 1846.**

Un gran número de inmuebles sería destinado a cuarteles, debido especialmente, a la falta de espacio para alojar al gran número de tropas que estaban reclutadas en un momento bélico delicado. Josefina Bello puntualiza como la utilidad práctica de estos inmuebles hicieron en definitiva que un gran número de ellos fueran ocupados por el ejército, especialmente con el reclutamiento de la quinta extraordinaria que tanto contribuiría a la victoria liberal, por ello no hay que negar la utilidad que en ese momento reportaron muchos conventos al ejército, aunque el precio pagado fuese demasiado alto y de efectos irreparables para el patrimonio artístico. En **la Real Orden de 12 de julio de 1846** se instruía un expediente general en que con conocimiento del Ministerio de la Guerra se determinen por provincias los edificios puramente indispensables que en circunstancias normales hayan de destinarse para el servicio del ramo de la Guerra. Se notificaba como *desde el año de 1837 en adelante se habían ido haciendo concesiones de edificios conventos para objetos militares a medida que fueron reclamándose, sin que conste si estarán o no satisfecha todas las necesidades, o si ha habido excesos que siempre es tiempo de reformar, e interesado al ramo de amortización tener disponibles los que no sean indispensables para objetos de utilidad pública.* Se instruía por consiguiente la elaboración de un expediente general, en que con todo conocimiento del Ministerio de su digno cargo se determinen por provincias los edificios puramente indispensables que en circunstancias normales hayan de destinarse para el servicio del ramo de Guerra, alejando la continuación de cualquier abuso que haya podido cometerse con la mejor buena fe; teniendo V.E. a bien manifestar a este Ministerio el resultado de sus disposiciones. Como el propio Gaya Nuño puntualiza a la hora de analizar la destrucción patrimonial del momento, *las leyes de guerra están generalmente al margen de cualquier consideración artística y la guerra carlista no excluyó esos márgenes. Una parte considerable de los inmuebles conventuales sufrieron las consecuencias de ello tras ser ocupados por las tropas acuarteladas. Pero tampoco muchas corporaciones y particulares, ya guiados por motivos especuladores o por falta de sensibilidad y conocimientos artísticos, pueden inhibir su responsabilidad en la contribución a su desaparición.* Un caso emblemático lo encontramos en el extinguido convento de la Victoria de Granada, que había mantenido su uso



conventual desde su construcción hasta el 20 de agosto de 1835, momento de la definitiva exclaustación de los religiosos, pasando a propiedad del Estado. Desde 1835, el edificio fue perdiendo prestancia por sus continuos abandonos, aunque en algunos momentos se destino su uso a Hospital Militar, teniendo la obligación el ramo de la Guerra de repararlo y conservarlo en buen estado, lo que ya provocaría un litigio entre la Hacienda Militar y la Junta de Bienes Nacionales para su mantenimiento, hasta que en 1863 la Junta Superior Facultativa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército declararía al inmueble inútil para el servicio de la Guerra. En 1866 sería adquirido por un propietario particular, D. Cristóbal Calvo, tras pública subasta, y tras aceptar los pliegos de condiciones que se establecían en la adquisición, que era la de conservar algunas dependencias conventuales que todavía permanecía en pie: *El solar perteneciente al edificio del suprimido convento de la Victoria de esta ciudad, procedente del Estado, y en él se encuentra hoy sin destruir el anillo del patio principal, sostenido por 28 columnas de piedra dura en su planta baja o claustro y otros 28 sobre los anteriores formando el segundo cuerpo o corredor con arcos de piedra franca y sin techumbres de madera sin suelo más que el superficial, con todos los muros destruidos quedando algunos restos de ellos de tapicería de tierra y otros de mampostería de piedra; también se encuentra la bóveda de piedra de la escalera principal, que es de piedra franca(...)*. Sin embargo, a principio de 1865 el propietario comenzaría a demoler el edificio, por lo que se le fue impuesto una multa al no haber cumplido la regularidad del procedimiento. Al no pagar la multa, el inmueble sería expropiado y nuevamente subastado. A pesar de ello cabe mencionar que el propietario a pesar de haber sido desahuciado, derribo el patio<sup>2264</sup>, como lo describe el historiador Manuel Gómez-Moreno: *El derribo del patio se hizo con tan poco acierto que al sacar la clave del primer arco, todos vinieron a tierra, quedando reducido a un montón de escombros*<sup>2265</sup>. Finalmente, sería promulgada la **Real orden de 1º de octubre de 1867** por el que se dispondría que las reformas del cuartel instalado en el claustro de la iglesia de San Pablo del Campo no afectasen a la conservación del edificio.

*- La designación de los conventos que pudieran ser aplicados al culto: La Real Orden de 30 de octubre de 1849 y la Circular del 14 de noviembre de 1849.*

Como todavía la situación seguía confusa, al no haberse delimitado que edificios debían ser considerado monumentos, se van a promulgar la **Real Orden de 30 de octubre de 1849 y la Circular del 14 de noviembre de 1849**, por el que se invitaba a los prelados diocesanos para que designasen los conventos procedentes de las extinguidas comunidades que pudieran ser aplicados al culto, para entregar los que no reclamasen a los ayuntamientos para fines de utilidad común, o para enajenarlos a censo en última instancia. En la exposición de motivos de la la Real Orden de 30 de octubre se expondría las

---

<sup>2264</sup> ACALE SANCHEZ, Fernando, 2005, pp.260-261.

<sup>2265</sup> GÓMEZ-MORENO, Manuel *Guía de Granada*. Granada, p.429.

causas de la disposición: *Tomando en consideración la Reina lo manifestado repentinamente por esa Dirección acerca del estado de ruina en que se hallan la mayor parte de los edificios conventuales que aún existen en administración, procedentes de las comunidades religiosas de ambos sexos, se ha servido resolver que todos los expresados edificios que los respectivos diocesanos en cuyos distritos radiquen, no utilicen para el culto, y en su defecto los Ayuntamientos para objetos de utilidad común.* En la **Real Orden de 12 de diciembre de 1849**, se establecería que los obispos designasen los edificios que pudieran destinarse para casa e institutos de misiones, subrayándose nuevamente el carácter de edificio de culto, *se ha mandado que se invite a los prelados diocesanos para que se designen los conventos procedentes de las extinguidas comunidades religiosas de ambos sexos que actualmente existen sin destino, y puedan aplicarse para el culto, entregándose en otro caso a los Ayuntamientos para objetos de utilidad común.*

*- La suspensión de las ventas de los bienes inmuebles pertenecientes a cofradías y otras instituciones seglares.*

Hay que apuntar que todavía el Gobierno Moderado promulgó algunas medidas contrarias a los intereses de la propiedad eclesiástica como **la Real Orden de 24 de septiembre de 1845**, por el que se declaró que los bienes procedentes de ermitas, santuarios y cofradías no habían que incluirse en la devolución acordada por la ley del 3 de abril de 1845, e incluso en **el Real Decreto de 11 de junio de 1847** se mandaba a proceder a la venta de los bienes de maestrazgos y encomiendas de las cuatros Ordenes Militares y la de San Juan de Jerusalén. **Real Orden del 29 de julio de 1847 mandando que se proceda a la venta de un edificio ruinoso correspondiente a bienes nacionales**, concretamente el antiguo Hospital de san Juan de Dios de Almagro, por lo que se resolvió que se procediera su venta, con la obligación de edificar en su terreno, no pudiendo tener aplicación el Real Decreto de 11 de abril de 1845 al no poder conservarse. La medida se haría extensiva a todos **los edificios-conventos que se hallen en igual estado de ruina**, como se subraya al trasladar esta Dirección en 9 de agosto siguiente la presente Real Orden. La protección de los edificios-conventos de órdenes religiosas femeninas va a dar lugar a unas series de problemas en el ámbito administrativo a la hora de proteger en cierta forma estos inmuebles. Cabe mencionar en este punto la **Real orden del 17 de septiembre de 1847** mandando que sobre denuncias de casas ruinosas pertenecientes a los conventos de monjas, se observen las reglas establecidas en la Real orden de 30 de septiembre de 1842, a raíz de la consulta que el Intendente de Alicante había realizado al Ministerio de Hacienda el día 19 de agosto de 1847, en que manifiesta en que estando suspensa la venta de los bienes de los conventos de religiosas a consecuencia del Real Decreto de 26 de julio de 1844, no pueden aplicarse a las casas de esta procedencia denunciadas como ruinosas las reglas establecidas en la Real orden de 30 de septiembre de 1842 para todas las de la Hacienda Pública que se hallen en este caso, y por lo mismo ignora qué medidas deberán adoptarse para evitar las

desgracias que puedan sobrevenir. Como medida se establecería *que se observen las reglas prescritas en la citada Real orden respecto de las referidas casas ruinosas, a las cuales no deben alcanzar el decreto de suspensión de la venta por las funestas consecuencias que pudieran producir.*

En una línea parecida encontramos el **Real Decreto del 23 de septiembre de 1847** alzando la suspensión de venta de bienes que pertenecieron a hermandades, ermitas, santuarios y cofradías en la que se dispondría el alzamiento de la suspensión de venta de bienes que pertenecieron a hermandades, ermitas, santuarios y cofradías, prevenida por el Real decreto de 26 de junio de 1844 (art.1º), por lo que se procederá a su enajenación en los términos prevenidos por la ley de 2 de septiembre de 1841 e instrucciones posteriores (art.2º). En **octubre de 1847** se legislaba sobre la obligación de reparación y conservación de los inmuebles propiedad del Estado, aunque dicha norma no llegaría a entrar en vigor, como apunta Martínez Alcubilla. Una Real Orden posterior, **del 14 de diciembre de 1847**, mandaría que se observase la promulgada el 30 de septiembre de 1842 sobre casas ruinosas procedentes de hermandades, santuarios y cofradías. En el contenido de la Real Orden se precisaba que *un considerable número de casas de los que administran las oficinas de Bienes Nacionales, procedentes de hermandades, santuarios y cofradías, son improductivas por su estado ruinoso, y que su reparación ocasionaría a la Hacienda Pública gastos exorbitantes, por lo que se propone se aplique a ellas la disposición acordada en Real Orden de 17 de septiembre último, respecto a las casas ruinosas procedentes de los conventos y religiosas que se hallan en el mismo caso.* La resolución sería muy parecida del caso de los conventos femeninos, ya que se establecería que *se observen las reglas prescritas en la Real Orden de 30 de setiembre de 1842, respecto de las casas ruinosas de la citada procedencia, como se dispuso en la referida de 17 de setiembre de este año en cuanto a las de los conventos de los religiosos, para evitar las funestas consecuencias que pudiera producir su hundimiento.*

Al mismo tiempo las ventas de inmuebles van a proseguir, como lo prueba el **Real Decreto** de 7 de abril de 1848 mandando proceder a la venta de todos los bienes de las encomiendas vacantes de las cuatro órdenes militares, la de las ermitas, santuarios, hermandades y cofradías de 12 de abril de 1848 (1º cuatrimestre de 1848, 1849, p.361) a la que se unirían el **Real Decreto de 1º de mayo de 1848**, declarando en venta todos los bienes raíces, censos, rentas, derecho y acciones de las Encomiendas de la orden de San Juan (2º cuatrimestre de 1848, 1849, p.6). Unos meses después sería promulgada la **Real Orden de 6 de mayo de 1848** por el que se disponía que el Real decreto de 7 del mismo mes, por el que se dispone la enajenación de los bienes procedentes de encomiendas de las cuatro órdenes militares, edificios de conventos, y los de ermitas, santuarios, hermandades y cofradías, no comprende a los templos y santuarios abiertos en la actualidad para el culto religioso por la piedad y veneración de los pueblos, cuyos edificios deben de

quedar bajo la inspección de las autoridades eclesiásticas respectivas. Con el **Real decreto de 11 de julio de 1848** se suspendería asimismo la enajenación de los bienes raíces, derechos y censos que pertenecieron a las encomiendas de las cuatro órdenes militares y de las correspondientes a ermitas, santuarios, hermandades y cofradías, cuya venta se había mandado proceder por el Real decreto de 7 de abril de 1848 (art.1).

***- La configuración de los bienes pertenecientes a Patronatos de los conventos suprimidos en dominio público: La Real Orden de 1º de diciembre de 1846.***

Una de las novedades más significativa en orden a la configuración de un verdadero Patrimonio Nacional formado por los bienes desamortizados de interés histórico y artístico sería la promulgación de la **Real Orden de 1º de diciembre de 1846** en la que se declaraba que formaría parte de los bienes nacionales las pinturas y demás efectos donados por los patronos de los conventos suprimidos, con la limitación que se expresa (Colección, p.191. 4º trimestre de 1846, 1849). La disposición surgiría debido al expediente formado a instancia de la comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Córdoba, en la que se procedía a cuestionar el deslinde los derechos de los patronos con respecto a los objetos artísticos que se encuentran en las capillas y altares de patronazgos fundados en los conventos suprimidos, por lo que el Consejo Real emitió un dictamen, que en su conformidad se estableció que todas las pinturas y demás efectos donados por los patronos a los conventos suprimidos, salvo el caso que la escritura de donación contenga clausula de reversión pertenecían al Estado (1º), y que las personas que se creyeran con derecho a dichos bienes artísticos debían de presentar una solicitud documentada al Jefe Político, siendo oída por el Consejo Provincial, que en caso éste de que estimase que debía de ser devuelto, enviaría el expediente con el informe del Consejo al Ministerio para su resolución y en caso de que no estimase procedente la devolución, dispondría el depósito de los efectos, haciéndolo saber a la parte interesada *por si le conviene acudir a los tribunales ordinarios en reclamación judicial* (art.2), por lo que el derecho de la propiedad privada quedaba salvaguardado. Por la **Real Orden de 20 de agosto de 1846** se dispuso a la Junta de venta de bienes nacionales que se pusiesen a disposición de los respectivos diocesanos las alhajas que existían en varias provincias, procedentes de las iglesias y conventos.

**1.3.1.4. Un instrumento de tutela del patrimonio eclesiástico desamortizado por lo que quedaba exceptuado de venta: La Declaración de Monumentos Históricos.**

¿Qué significado jurídico conllevaba la declaración de monumento histórico y artístico? El Estado consideraría la existencia de algunos bienes inmuebles que por su valor histórico y artístico debía ser protegido por lo que se disponía que debía de ser exceptuado de la venta de Bienes Nacionales. En

esta etapa serían declarados Monumentos Nacionales un número muy reducido de bienes:

Real Orden de 28 de agosto de 1844, confirmada por la Real orden de 28 de septiembre de 1845.

Real Orden de 24 de septiembre de 1845, el ex convento de San Marcos de León.

Real Orden de 23 de febrero de 1856, el ex convento de Santa María de la Rábida, Palos de la Frontera, Huelva. Confirmada y ampliada por la Real Orden de 27 de junio de 1893.

Real Orden de 31 de julio de 1856, el ex convento de la Cartuja de la Defensión (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Real Orden de 2 de junio de 1866, la capilla de Santa Agueda, Barcelona.

Real Orden de 18 de septiembre de 1866, la iglesia de San Bartolomé, Logroño.

Real Orden de 16 de octubre de 1867, Monasterio de San Salvador de Leyre, Yesa (Navarra).

Real Orden de 16 de enero de 1868, Cámara de Comptos, en la ciudad de Pamplona, era perteneciente del Patrimonio Real<sup>2266</sup>.

El caso de San Marcos de León puede ser un ejemplo peculiar en este ámbito. Tras la exclaustación de los miembros de la Orden de Santiago, con la ley de 22-29 de junio de 1837, pondría en manos del Gobierno el antiguo convento. Unos años más tarde, en 1842, la Diputación Provincial solicitaría en pública subasta, la Diputación Provincial solicitaría en pública subasta el edificio, siendo adquirido con la cantidad de 985.700 reales. Sin embargo, el Gobierno no consideró factible la adquisición, por lo que no dio la autorización pertinente, declarando el edificio propiedad estatal por R.O. de 24 de julio de 1844. Con la creación de la Comisión Central de Monumentos en 1844, se elevaría la petición de declaración de San Marcos como monumento artístico e histórico en su reunión del 4 de enero de 1844. El escrito de solicitud sería un alegato de las ideas historicistas y del nacionalismo de corte romántico conservador, donde no faltan las referencias a los valores cristianos, al patriotismo, e incluso a su glorioso pasado. Con la Real Orden del 28 de agosto de 1844 sería reconocido oficialmente. Aunque la propiedad estatal se mantiene, en 1845 se cede el usufructo a la Comisión de Monumentos con la exigencia destinar el edificio a utilidad pública y haciéndose cargo de su reparación y conservación<sup>2267</sup>. La primera declaración de monumento nacional en Andalucía sería al monasterio de la Rábida, a raíz de la Real Orden de 28 de

---

<sup>2266</sup> Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España, Madrid, 1973, pp.27-28.

<sup>2267</sup> CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, M<sup>a</sup> Dolores, "El convento de San Marcos de León después de la desamortización", *Tierras de León: Revista de la Diputación Provincial*, Vol.37, N.105-106, 1998, pp.119-132.



febrero de 1856, después de una serie de vicisitudes que sufrió el inmueble religioso desde su exclaustración, que muestra la dejadez sobre la valoración y protección del patrimonio monumental por parte de la Administración gubernativa e incluso la descoordinación de sus instituciones y que recogemos en estos fragmentos de la obra de Fray José CollColón y la Rábida: *En virtud de la Real Orden circulada por el Ministerio de Hacienda el 10 de agosto de 1846, el convento de la Rábida hubo de ser destinado para Hospital de incurables, o si se quiere para cuartel de inválidos marinos ¡Vaya un pensamiento luminoso! Es el don de errar, de que con más o menos razón tienen ganada patente en Europa los Gobiernos de España (...) He aquí la aludida Real orden. <<Atendiendo S.M. la Reina a la situación topográfica y gloriosos recuerdos históricos que excita el antiguo edificio que fue convento de Nuestra Señora de la Rábida, en la provincia de Huelva, cerca de Palos, ha tenido a bien mandar, conformándose con lo propuesto por la Comisión Central de Monumentos Artísticos y por esa Junta (...), que dicho edificio sea entregado por la Hacienda para Casa de Refugio de veteranos inutilizados en el servicio de la marina española (...). Afortunadamente no llegó a tener efecto tan extraña disposición; motivo por el cual, viendo que el estado ruinoso de aquel edificio iba cada día en aumento, el entonces Gobernador Civil de Huelva, Don José María Escudero, propuso al Ministerio de Instrucción y Obras Públicas, fecha 8 de enero de 1851, la enajenación de los restos que quedasen de aquella fábrica y con su importe costear un modesto monumento erigido en aquel lugar en memoria de Colón. Rubor causa el recordar que la tasación pericial hecha para la valoración de la Rábida ascendía a la insignificante cantidad de 4.950 reales. Pero no es menor la ignominia con que, prescindiendo por aquella vez del obligado expediente, defirió el Ministro a lo solicitado, expidiendo, poco después de la moción hecha por el Gobernador, la siguiente Real Orden: <<MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS – He dado cuenta a la Reina (q.D.g.) del expediente entablado con motivo de la comunicación de V.S. de 8 de enero último, relativo a las obras de urgentes reparación que, a juicio de V.S. reclama el célebre monasterio de la Rábida; y enterada de todo S.M., oído el parecer de la Comisión Central de Monumentos sobre este asunto, se ha dignado resolver diga a V.S., como de su Real Orden lo ejecutó, que, respetando cuidadosamente la iglesia del citado monasterio, la cual se halla por fortuna en bastante buen estado, y todas las demás partes del edificio que, a juicio de peritos, pueden conservarse, proceda V.S. al derribo de las paredes absolutamente inservibles, y a la venta de sus materiales (...). Empero la mano de la Providencia, que tan clara y patente estamos viendo sobre aquel misterioso edificio, no consistió que se llevase a efecto tan vergonzosa disposición. Ocupaba desde poco días ante el puesto del Gobierno Civil (...) era este Don Mariano Alonso y Castillo, el cual, sorprendido al leer la orden que se le comunicaba (...), contestó a aquel Ministro, en estos términos: <<Excmo. Sr.: Acabo de recibir la Real orden (...) y habla sobre las obras de urgente reparación del notable convento de la Rábida, derribo de la parte ruinosa, aprovechamiento de sus depósitos (...). Sin embargo de que por mi parte daré a dicha solución el debido cumplimiento, he creído: por un principio de conciencia administrativa, tanto para el presente como para el porvenir (...) Como el retraso de unos pocos días no puede causar perjuicios en llevarse a debido efecto lo que acaba de preceptuárseme respecto al convento, espero de la ilustración de V.E.*



*un nuevo mandato (...) porque si en derribar y destruir parte de esos recuerdos fuésemos muy apresurados, la censura pública y la historia misma se apoderaría de nuestros actos, entregándolos a la animadversión de nacionales y extranjeros (...)>>. A tan enérgica cuanto bien fundada contestación, el Gobierno dio la callada por respuesta; en su consecuencia, la Diputación Provincial de Huelva determinó consignar anualmente un renglón en el presupuesto de conservación de monumentos y obras públicas, para poder atender a las reparaciones más indispensables de la Rábida (...) Siguióse un paréntesis de solicitud y zozobra por parte de los Hijos de Huelva; hasta que el 11 de marzo de 1854 llegaron a la Rábida los duques de Montpensier (...), los cuales, profundamente conmovidos a la vista de aquellas tan venerables ruinas, excitaron el celo de las autoridades y corporaciones de la provincia, y abriendo una suscripción, pusieron ellos al frente, mediante un donativo que en el acto aprontaron, con lo cual otros muchos siguieron su ejemplo; y una vez cubierto el presupuesto, se procedió rápidamente a la restauración, no, empero, de todo el convento, pero sí de una parte muy principal del mismo. Terminada esta, el 15 de abril de 1855, se hizo la inauguración (...). Por Real Orden de 28 de febrero de 1856, el convento de la Rábida fue declarado Monumento Nacional (...)<sup>2268</sup>.*

#### **1.3.1.5. El destino de los bienes muebles conventuales de interés histórico y artístico: La institucionalización museística.**

Como ya apunte anteriormente, es con la Revolución Francesa cuando se delimite la idea de formar museos públicos, a raíz de la nacionalización de los bienes de la Corona y la confiscación de las propiedades de la nobleza emigrada y de los conventos<sup>2269</sup>. Sería con este modelo cuando comienza a configurarse en la España Isabelina la necesidad de crear museos nacionales que depositaran aquellos bienes que se consideraban dignos de protección. Siguiendo la terminología utilizada por Calvo Serraller museo público no se refería a un espacio abierto *indiscriminadamente al público visitante, cuya satisfacción constituía su principal razón de ser y objetivo, sino también por identificarse con otros ideales característicos de la Ilustración: la nacionalización del patrimonio histórico-artístico, la universalización de la educación y la democratización de los bienes culturales*. Evidentemente en la fundación de los museos se puede observar un fundamento ideológico nacionalista, bajo el amparo de una burguesía que veía con buenos ojos la conservación del “glorioso pasado nacional”. Además los Museos se convertían en verdaderos difusores de la conciencia nacional a través de los bienes conservados<sup>2270</sup>. En este sentido Francisco Calvo Serraller afirma que *los museos se convierten en los nuevos templos de una sociedad efectivamente secularizada; esto es, cumplen la*

---

<sup>2268</sup> COLL, Fr. José *Colón y la Rábida* Madrid, 1892, pp.77-92.

<sup>2269</sup> Sería especialmente con Napoleón cuando al confiscarse los bienes de los estamentos privilegiados, crearía los museos públicos, como el del Louvre, en 1792, y el de Historia Natural o de los Monumentos Franceses en 1796.

<sup>2270</sup> Sobre la fundación de los museos nacionales, BOLAÑOS, M<sup>o</sup> *Historia de los museos en España*. Madrid, 1997.

*trascendental misión de preservar valores considerados fundamentales en el seno de una sociedad regida ya definitivamente por los cambios, cuya vertiginosa sucesión, de no existir, entre otras cosas, estos templos laicos, podría borrar la memoria no sólo de lo excelente, sino de todo lo verdaderamente memorable(...)*<sup>2271</sup>. Como apuntan Guillermo KurtzShaefer y Juan M. Valadés Sierra, *la creación de los museos provinciales en España surge como consecuencia directa del proceso de instauración de un nuevo aparato estatal tras el hundimiento del Antiguo Régimen a principio del siglo XIX, aparato cuya manifestación territorial fue la creación de las provincias como unidades políticas y administrativas*<sup>2272</sup>. Al mismo tiempo apuntan como los museos provinciales también irían adquiriendo un claro matiz ideológico, *nacen como instituciones participantes de la creación y asentamiento de la superestructura ideológica necesaria para el funcionamiento del nuevo modelo de gestión política y territorial; es decir, para que la reorganización territorial fuera creíble, era necesario fundamentar sus bases históricas y dotar de una materialidad al contenido de las mismas. En este sentido decimos que los museos participan de la creación de la nueva weltanschauung implícita en el modelo de división provincial (...)* En fin, los museos, *nacen en España con el fin de albergar, exponer y difundir un conocimiento histórico y artístico cuyo sujeto, objeto y ámbito era la provincia*

Serían las Comisiones Provinciales de Monumentos las encargadas de ir creando Museos Provinciales, de Bellas Artes y de Antigüedades, que desde la Real Orden de 13 junio de 1844 y la Real Orden de 24 de julio de 1844, se especificaban dicha tarea. Entre las muchas misiones que se le encomendarían cabría destacar: *Reunir los libros, códices y demás objetos preciosos literarios y artísticos pertenecientes al Estado que estén diseminados en la provincia, reclamando los que hubiera sido sustraídos y puedan descubrirse*(art.3.2.) *Cuidar de los museos y bibliotecas provinciales, aumentar estos establecimientos, ordenarlos y formar catálogos metódicos de los objetos que encierran*(art.3.4.). De gran relevancia, aunque no resaltado la importancia que ha tenido en la legislación española fue el Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, de 1865. En el Capítulo IV se dedicaría a los Museos Provinciales, entre los que se establecerían las categorías de Museos de Bellas Artes y Museos Provinciales. Las Academias Provinciales participarían en la configuración de estos Museos. Una verdadera red de museos provinciales irían estableciéndose por toda la geografía española, ubicándose en la mayoría de los casos en los conventos desamortizados. Así en el antiguo convento de Santa Fé se ubicaría el Museo de Bellas Artes de Zaragoza en 1844. En el

<sup>2271</sup> CALVO SERRALLER, Francisco *Museo público y mecenazgo en Mecenazgo y conservación del patrimonio artístico: reflexiones sobre el caso español*. Madrid, 1995 pp.28-29.

<sup>2272</sup> KURTZ SHAEFER, Guillermo; VALDES SIERRA, Juan M. "Museos, investigación y provincia, aproximación de los museos provinciales en España" *Revista de Museología*, 30-31, 2004, p.57.

ámbito andaluz, a raíz de la R.O. del 15 de octubre de 1844 nació el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Amador de los Ríos escribiría en 1845 *la Memoria comprensiva de los trabajos verificados por las Comisiones de Monumentos desde el 1º de julio de 1844 hasta igual fecha de 1845*, convirtiéndose en un alegato de acusación sobre la situación en que se encontraban los museos en estos años: *La Comisión Central abrigara la esperanza de que contaría cada provincia, si no con un Museo establecido, al menos con un depósito de cuadros tal que bastase para erigirlo. La revisión de los expedientes le manifestó tristemente lo contrario. Solo algunas provincias, habían tenido la fortuna de llevar a cabo los deseos de S.M. Hallábanse en unas partes amontonados los pocos lienzos que habían podido salvarse de la incuria, la ignorancia y la rapacidad. En otras partes habían perecidos en los usos más viles muchas de las más preciadas creaciones que eran la gala y ornamentos de las más suntuosas iglesias, y en otras finalmente apenas se tenía noticias de que se hubiesen recogidos en los momentos de la exclaustación de los regulares, ni formando siquiera inventarios de esta clase de objetos*<sup>2273</sup>. Como señala José Álvarez Lopera *a mediados de 1845 la realidad no podía ser más sangrante; solo una decena de provincias se habían llegado en constituir en museos (...) en el resto de las provincias los cuadros y esculturas se hallaban en el mejor de los casos, recogidos en depósitos a la espera de encontrar un local idóneo* (...) <sup>2274</sup>.

### **1.3.2. La génesis de la controversia entre la potestad civil y la potestad eclesiástica en la política de la restauración de los bienes inmuebles de propiedad eclesiástica.**

José María Calama precisa como en este periodo hasta la reforma secularizadora que se produciría en 1873, se concebiría la obra de restauración como una tarea religiosa, por lo que los expedientes incoados quedarían bajo la dependencia administrativa del Ministerio de Gracia y Justicia, encargado de las cuestiones eclesiásticas, y en concreto del Negociado de Edificios Diocesanos, al mismo tiempo que los prelados y los Cabildos participarían decisivamente en la tramitación de los expedientes y administraban las obras a través de las Juntas Diocesanas para la Reparación de los Templos, compuestas exclusivamente por canónigos y presidida por el Obispo, faltando pues una profesionalización del mismo y lo más importante, el Estado, a través del Ministerio, se limitaría a otorgar los fondos y a nombrar al arquitecto a quien a propuesta de la Real Academia de San Fernando se encargaría la dirección facultativa de la obra<sup>2275</sup>. Desde 1850 a 1873 se produce un hecho trascendental: la incoación de los primeros expedientes de restauración de edificios religiosos por parte de la propia Administración, que coincide con un hito importante en la historia de la arquitectura española, la creación de la Escuela de Arquitectura en 1849, cuyos arquitectos surgidos de esta institución

---

<sup>2273</sup> AMADOR DE LOS RÍOS, José, *Memoria comprensiva de los trabajos verificados por las Comisiones de Monumentos desde el 1º de julio de 1844 hasta igual fecha de 1845*, Imprenta Nacional, 1845.

<sup>2274</sup> ALVAREZ LOPERA, José, 2004, pp.17-18.

<sup>2275</sup> CALAMA, José María; GRACIANI, Amparo, 1998, p.36.

académica serán los encargados de acometer dicha restauración en los inmuebles. Durante los primeros años de la década de los cincuenta se llevan a cabo simplemente dos actuaciones digno de mencionar: San Jerónimo, el Real, bajo los auspicios de Pascual Colomer (1801-1870), y la reconstrucción de la Catedral de Palma de Mallorca, que va a generar al mismo tiempo los primeros debates teóricos sobre restauración de inmuebles históricos. Será ya a finales de la década de 1850, cuando podemos apreciar un incremento en los expedientes de restauración, como fue el caso de la Catedral de León en 1859, que serían dirigidas por Matías Laviñas. Entre las causas de este incremento en la restauración inmobiliaria señala José María Calama la administrativa, al haberse perfeccionado y agilizado el mecanismo de funcionamiento de la Comisión Central de Monumentos, que comienza a dar resultados satisfactorio a partir de 1859; estadístico, al existir un soporte de apoyo previo a las actuaciones de restauración, tras aparecer entre 1859 y 1867 los diecinueve tomos de los *Monumentos Arquitectónicos de España* e incluso económica, ya que a partir de 1859, va a ir saliendo los primeros fondos para la restauración de edificios religiosos. En este periodo, cabe destacar que la restauración de los edificios religiosos se concibe más como una tarea religiosa, que como fundamento histórico-artístico, especialmente tras el Concordato celebrado entre el Estado y la Iglesia en 1851<sup>2276</sup>. En el caso de España, la restauración de la arquitectura medieval tuvo pronto una rápida proyección, lo que dio como resultado una política proteccionista especialmente en la etapa isabelina y en la Restauración. Al igual que había ocurrido con Notre-Dame, la restauración de la Catedral de León en 1859 se convirtió en el paradigma de restauración del patrimonio hispano del siglo XIX,<sup>2277</sup> multiplicándose los casos por toda la geografía española<sup>2278</sup>. Una pléyade de arquitectos se convertirían en unos verdaderos fervientes seguidores de Viollet, entre los que cabría citar a Nicolás Pascual y Colomer (1801-1870), que intervino en la restauración de la iglesia de los Jerónimos de Madrid, añadiéndole la fachada en 18 ; Aníbal Álvarez Bouquel (1806-1870), que modificó la iglesia y el convento de Doña María de Aragón, para convertirlo en sede del Senado; el Marqués de Cuba (1826- ) o Elías Rogent , Un caso paradigmático lo encontraríamos en Juan de Madrazo, que gracias a su empeño salvaría la Catedral de León. Sin embargo, en muchas ocasiones, el desconocimiento de la arquitectura medieval llevarían a desvirtuar el carácter original del edificio, como podemos contemplar en la intervención que se hizo en la reconstrucción de la fachada principal de la catedral de Palma de Mallorca por Juan Bautista Peyronnet, iniciada en 1852, cuya intervención desvirtuó la identidad del gótico mallorquí, al basarse en

<sup>2276</sup> CALAMA, José María; GRACIANI, Amparo, *La restauración decimonónica en España*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998, p.36.

<sup>2277</sup> GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, Ignacio *La Catedral de León. Historia y restauración (1859-1901)*. León, 1993.

<sup>2278</sup> GONZALEZ-VARA IBAÑEZ, Ignacio *Restauración arquitectónica en España durante el siglo XIX: Teoría, fuentes e ideología*, Valladolid Ambito, 1996.

proyectos de modelos del gótico italiano, por lo que fue ampliamente criticada por algunos críticos del momento, como José María Quadrado.

**1.3.2.1. Un ensayo de la política tutelar de la restauración inmobiliaria eclesiástica durante la Década Moderada: El decreto de 23 de mayo de 1845 y la Circular de 4 de diciembre de 1845.**

Se fue adoptando al mismo tiempo una serie de medidas organizativa sobre la institucionalización administrativa del patrimonio inmobiliario eclesiástico, especialmente con la Junta del Culto y Clero, que afectaría en cierta medida a la salvaguardia del patrimonio monumental. En la Real Orden del 20 de febrero de 1846 se dispondría una serie de disposiciones para la organización más conveniente de la Junta de Culto y Clero y todas sus dependencias, que había sido creada por el Real decreto de 23 de mayo de 1845, que seguiría teniendo la misma impronta, entendiéndose siempre que los individuos que la componen no gozarán de más sueldo ni redistribución que las que les corresponda su empleo o cesantía (art.1º). Al mismo tiempo, se declaraban permanentes las comisiones diocesanas que en ese momento existían presididas por los Reverendos Obispos o gobernadores bajo las órdenes de la Junta, la cual presentará al Gobierno en el término más breve que le sea posible el reglamento por que aquellas se hayan de regir (art.2º). Estas comisiones continuarán en la administración en común de los bienes devueltos al Clero, bajo las órdenes de la Junta Superior (art 3º) y se da establecía una uniformización administrativa al quedar suprimidas cualesquiera otras comisiones relativas a la dotación del culto y Clero, como asimismo la de Estadística de obras pías, capellanías y aniversarios, pasando sus papeles y registros a la Junta superior, que desempeñará por sí misma estos trabajos (art.4º). Con la ley de 20 de abril de 1849, el Ministerio de Gracia y Justicia será el encargado de confeccionar el presupuesto de culto y clero, sustituyendo al de Hacienda. Al mismo tiempo por virtud del artículo 5 del Real Decreto de 29 de octubre de 1849 se produce una modificación en la organización de la dotación del presupuesto del culto y clero, al dar prioridad al diocesano, quien oído al cabildo catedralicio, nombraría un Administrador General, que serviría de intermediario entre la diócesis y el Ministerio de Gracia y Justicia. En 1850 sería suprimida la Junta de dotación del culto y clero. Poco tiempo después, por Real Orden de 21 de febrero de 1852 serían constituidas las Juntas de liquidación de haberes del clero, dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, que serían establecida en la capital de cada diócesis, siendo presididas por el propio diocesano. En 1850 sería creada a su vez por Real decreto de 8 de marzo la Junta Consultiva Eclesiástica, que sería compuesta por cuatro eclesiásticos y tres seculares, y un año más tarde por Real decreto de 2 de mayo de 1851, la Cámara Eclesiástica<sup>2279</sup>.

---

<sup>2279</sup> MOTILLA, Agustín *La Administración española en materia religiosa (1808-1977)*, Editorial Comares, Granada, 2009, pp.69-71.



Con la *Circular del 4 de diciembre de 1845*, se dictaron las reglas que habían de observarse en el curso y decisión de las exposiciones de los Ayuntamientos relativos al ruinoso estado de las iglesias parroquiales y a la necesidad de procurar su reparación. En la exposición de motivos ya se contenía el estado ruinoso que presentaba un gran número de inmuebles conventuales desamortizados, incrementándose por la poca resolución inmediata que tenían en sus manos los propios ayuntamientos: *Diversos ayuntamientos han recurrido, ya por el Ministerio de Gobernación de la Península, ya directamente por el de Gracia y Justicia, exponiendo el ruinoso estado de sus respectivas iglesias parroquiales, y la necesidad de procurar su reparación, a fin de mantener el decoro debido a los templos y precaver las desgracias que a los fieles pueden sobrevenir mientras asisten a las funciones religiosas.* La regulación del procedimiento había quedado definida en la Ley del 31 de agosto de 1841, referente a la reparación de las parroquias, para lo que *debía satisfacerse con los derechos de estola y los demás recursos que hasta entonces se había aplicado a las fabricas*, a lo que se añadía en el artículo 1º que *no bastando sus productos a cubrir el presupuesto se completara por un reparto que se impondría a los vecinos residentes en el pueblo, fue muy conforme con aquel sistema que se sometiese a los ayuntamientos y diputaciones de provincia conocer de tales asuntos, y acordar la inversión de la cantidad suministrada por los contribuyentes.* Sobre esta base se formuló la instrucción que acompaña a dicha ley, pero debido a las dificultades de financiación posterior (*habiéndose prescindido de los repartos vecinales en la ley de 23 de febrero último y designado otra clase de arbitrios para atender a las obligaciones mencionadas*), se tuvo que alterar los trámites que seguían en la instrucción de los expedientes sobre reparación de los templos parroquiales, y trazar la pauta a que han de sujetarse en la actualidad. El procedimiento que se adoptaría en cuestión fue muy exhaustivo: Las solicitudes sobre gastos extraordinarios de edificación y reparación de las iglesias parroquiales serán dirigidas al diocesano por el respectivo cura y por el ayuntamiento del pueblo, y en ella se expresará el servicio a que se obligan los vecinos, bien sea ofreciendo limosnas o su personal trabajo, o bien facilitando materiales o acarreándolos con las yuntas de su propiedad, o contribuyendo de cualquiera otro modo a la ejecución de la obra; y esta oferta se tendrá presente para calcular el presupuesto (art.1º). El diocesano remitirá la instancia con su informe al Intendente de Rentas de la provincia, cuya autoridad designará un arquitecto que pase a examinar el estado del templo, extienda el presupuesto de gastos, y, en caso necesario, levante un plano de las obras que se hubieren de efectuar. Con vista de estos datos, y de los que la Intendencia estimare conveniente reunir, hará las oportunas observaciones, ya sobre la esencia de la solicitud, ya sobre el todo o parte del presupuesto formado (art. 2º). Instruidos así los expedientes, se elevarán por las intendencias al Ministro de Gracia y Justicia, a fin de que S.M. acuerde la correspondiente resolución (art.3º) y por último, en el caso de accederse a la instancia se cargará al imprevisto la cantidad designada, y se entregará a una junta compuesta del alcalde,



procurador síndico y cura párroco, los cuales autorizarán con su firma el ingreso y la inversión de los fondos librados, y rendirán a la Intendencia la cuenta de cargo y data, acompañada con los documentos justificativos (art.4º). Posteriormente en virtud de la Real Orden de 27 de mayo de 1850 sería acordado que los diocesanos designasen las tres obras que sean más urgentes en los templos de sus territorios, aplicándose preferentemente el presupuesto asignando á las reparaciones y reedificaciones de los templos *todas las cantidades de que pueda disponerse, y a fin de reunir los datos necesarios para proceder con acierto en materia tan importante, , al propio tiempo el método que se haya observado en la misma, o en su defecto el que estime más conveniente para dirigir los trabajos y evitar cualquier género de abusos en la aplicación de los fondos que se destinen a objetos tan sagrado.*

#### **1.3.2.2. La impronta del Concordato de 16 de marzo de 1851 en la tutela pública del Patrimonio Eclesiástico Monumental: El Real decreto de 19 de septiembre de 1851.**

La promulgación del Concordato de 16 de marzo de 1851 tuvo una impronta trascendental en la política tutelar del patrimonio inmobiliario de propiedad eclesiástica, ya que se intensificaba la política de restauración por las instancias públicas. Con la promulgación del Real decreto de 19 de septiembre de 1851, modificando la Real Orden de 4 de diciembre de 1845, se intentaría suplir las carencias administrativas que habían alargado la tramitación de los expedientes de tramitación de los expedientes sobre edificaciones y reparaciones de las iglesias parroquiales del Reino, con la consiguiente dificultad para su aplicación. Como queda reflejado en el contenido del articulado, la potestad pública sobre la restauración de inmuebles religiosos quedaba aparentemente limitada por las instituciones eclesiásticas, dejando una cierta intervención administrativa para un grupo de bienes inmuebles muy específico. De esta manera en principio sería el Diocesano el que va a marcar la política de restauración, por lo que las solicitudes sobre gastos extraordinarios de edificación y reparación de las iglesias parroquiales, le serían enviadas por el respectivo Cura Párroco y por el Ayuntamiento del pueblo (art.1º), exponiéndose *el servicio á que se obligan los vecinos, bien sea ofreciendo limosnas, o su personal trabajo, bien facilitando materiales, o acarreándolos con las yuntas de su propiedad, o contribuyendo de cualquier otro modo a la ejecución de la obra, y esta oferta se tendrá presente para calcular el presupuesto*(art.1), resolviendo por sí solo si el presupuesto no excediera de 500 reales (art.2). Para el reconocimiento de la obra que fuera a ejecutarse, así como la formación de su presupuesto, bastaría *el informe por escrito de un alarife, maestro de obras o aparejador de reconocida capacidad y honradez, y de cuyas circunstancias informarán al Diocesano el Párroco y el alcalde* (art.3). Se designaría una Junta compuesta de cura párroco y primer teniente o coadjutor donde lo hubiere; del alcalde y procurador síndico, del mayor contribuyente del pueblo, y de los dos feligreses que mayor limosna hubieren ofrecido para la ejecución de la obra, haciendo de depositario-administrador la

persona que la misma Junta elija (art.4), que rendiría cuenta al Diocesano, quien reparándola en lo que creyere conveniente hasta darla su aprobación, remitirá al Ministerio de Gracia y Justicia un estado o resumen de la inversión de caudales, con copia de su decreto de aprobación (art.5). En caso de que la obra se hubiere hecho por el pueblo, bastaría la aprobación del Diocesano (art.5). La libertad de acción por parte de la autoridad eclesiástica correspondiente, en este caso el Diocesano quedaba reflejado en virtud de su coste económico, concretamente cuando el importe de la edificación o reparación excediera de 500 reales, y no pasase de 2000, al mismo tiempo que no tuviese un mérito artístico especial, por lo que el examen de la obra y la formación del presupuesto se comprobaría por mandato del Diocesano, con el informe constante de dos maestro de obra, y de un tercero, caso de discordia (art.6). Sin embargo, el Diocesano aunque *declarara por si la necesidad de la obra*, no procedería a su ejecución sin que ante lo hubiera puesto en conocimiento del Gobernador de la provincia, *quien, tomando los informes que creyere conveniente, a más de los necesarios del alcalde y procurador síndico del pueblo, manifestará al Diocesano su conformidad o disidencia fundada, en el término de veinte días siguientes a la comunicación que se le hiciere* (art.7). En caso de disidencia el propio Gobernador consultaría al Gobierno por el Ministerio de Gracia y Justicia, mientras que en caso contrario, por el que el Gobernador hubiese agotado el plazo para reclamar sin haber contestado se procedería a la ejecución de la obra, libramiento e inversión de caudales. Al mismo tiempo el Gobernador quedaría al margen cuando la obra se ejecutase *por ofrenda o a costa de los pueblos* (art.7). Una vez concluida la obra, y examinadas y aprobadas sus cuentas por el Diocesano, serían remitidas al Gobernador para que se obtuviese su aprobación en el preciso término de un mes; siendo devueltas al Diocesano (art.8). En caso de que la obra excediere en su presupuesto de 2000 reales, o hubiere de verificarse en iglesias que radiquen en las capitales o grandes poblaciones de provincia, o pudiese comprometer al mérito arquitectónico de los templos donde quiera que existan, aunque no excediese de dicha suma, el Diocesano, de acuerdo con el Gobernador de la Provincia, designaría un arquitecto que pasara a examinar su estado, forme el presupuesto de gastos, y en caso necesario levantase el plano de las obras que hubiesen de efectuar, de acuerdo con las directrices de la Academia de San Fernando (art.9). Una vez recopilados los datos técnicos pertinentes que el Diocesano y el Gobernador estimasen conveniente reunir, harían las oportunas observaciones, *ya sobre la esencia de la solicitud, ya sobre el coste del presupuesto, ya sobre la ejecución de las obras*, remitiendo el expediente por mano del Diocesano al Ministerio de Gracia y Justicia, a fin se acordase la resolución que tuviere por conveniente (art.10). El expediente sería devuelto al Diocesano para su ejecución, que tendría que hacerse en los términos respectivos tal como quedaban indicados en los artículos 4º, 5º y 8º (art.11).

Tanto el Gobierno como la Iglesia estaban interesados en que los bienes arquitectónicos fuesen conservados, especialmente en la conservación de las iglesias y catedrales, por lo que como resultado del Concordato de 16 de marzo de 1851, se promulgaría el Real Decreto de 29 de noviembre de 1851, disponiéndose que los prelados diocesanos, el patriarca de las Indias y las personas que estuviesen a cargo de las catedrales, colegiatas y parroquias recibiesen la dotación necesaria para su conservación. Se establecía un fondo de reserva para la restauración de las iglesias, que en cierta manera significaron las primeras partidas para el mantenimiento del patrimonio. Ciertamente hubo una amplia polémica en la nueva política conservacionista no solamente desde las filas más radicales, sino incluso por la propia Iglesia que consideraba escasa la inversión económica realizada. Sin embargo, la Iglesia consiguió un amplio papel en la protección patrimonial, ya que hasta este momento la conservación de los monumentos había estado en manos de la administración civil, concretamente al Ministerio de Fomento, que encargaba los proyectos a un arquitecto de la Real Academia de San Fernando, y con el concordato sería el Ministerio de Gracia y Justicia, a través del Negociado de Edificios Diocesanos, serían los que se encargarían de ello. Como apunta Miguel Ángel López Trujillo, *con el Concordato cambia la política administrativa sobre el patrimonio monumental, al ser consideradas las restauraciones de templos una labor religiosa se hicieron depender del Ministerio de Gracia y Justicia, y dentro de él al Negociado de Edificios Diocesanos. Esto significaba que no iban a ser arquitectos diplomados sino que, como otra concesión más a la Iglesia, se cedían a su autoridad la gestión y el control administrativo de las restauraciones, concretamente a las juntas diocesanas para la reparación de los templos, compuestas exclusivamente por canónigos y presididas por el obispo*. Esta controversia entre la potestad civil y religiosa en el ámbito de la restauración proseguiría posteriormente durante la etapa de la Restauración. Una serie de decretos en los años sucesivos irían dotando de fondos de gastos de restauración y mantenimiento de los inmuebles religiosos como el Real decreto de 29 de noviembre de 1851 disponiendo que desde el día 17 de octubre de ese mismo año, los Prelados Diocesanos, perciban la dotación que bajo todos los conceptos le correspondan. En la lectura de su artículo 10 se puede apreciar el papel que iban a adoptar los obispos diocesanos en la dotación de gastos, por lo que se recomendaban que se destinasen del fondo de reserva para la reparación extraordinaria de templos, lo que se utilizara la mayor cantidad posible, sin perjuicio de que el Gobierno contribuya convenientemente por su parte con arreglo al final del artículo 36 del Concordato, especificándose como *en este último caso los mismos diocesanos instruirán previamente los oportunos expedientes, y obtendrán la Real aprobación en los casos que proceda, con arreglo al Real decreto de 19 de septiembre último*.

### **1.3.2.3. La asignación presupuestaria en la restauración de bienes inmuebles del Patrimonio Eclesiástico: Los arreglos parroquiales.**

Los arreglos parroquiales se van a convertir en un nuevo instrumento de política tutelar en el ámbito de la restauración de los inmuebles religiosos de interés histórico y artístico. De esta manera se va a promulgar una serie de disposiciones normativas como la **Real orden circular de 3 de septiembre de 1854 y la Real Orden de 8 de mayo de 1856** en la que se dispondría que se le designara a los diocesanos que activasen la conclusión de los expedientes sobre arreglo parroquial. La culminación de la centralización administrativa del papel del diocesano a la hora de reparación de los conventos de la religiosa llegaría con la publicación del **Real decreto de 12 de junio de 1857** disponiendo que las solicitudes sobre gastos extraordinarios de reparación de las iglesias y conventos de Religiosas serán dirigidas al Diocesano por la Superiora de la Comunidad respectiva, *expresando en ellas si hay algún donativo, oferta o limosna de vecinos o personas bienhechoras que contribuyan a la ejecución de la obra, circunstancia que se tendrá presente para calcular el presupuesto* (art.1º), al mismo tiempo que el Diocesano remitiría las solicitudes al Ministerio de Gracia y Justicia con su informe *para que las atienda a medida que le permitan los fondos destinados a este objeto y las reclamaciones que haya de la misma clase* (art.2). Si el importe era de menos de 12.000 reales y no fuese un edificio de mérito artístico, el examen de la obra y los planos lo haría un aparejador, alarife o maestro de obras; en cambio, si excedía de esta cantidad o el edificio tenía un interés artístico, tenía que ser verificado por un arquitecto de la Real Academia de San Fernando, nombrado por el Diocesano. El expediente pasaría luego al Gobernador para que hiciese las observaciones pertinentes, y, por último, aprobado el presupuesto por el Ministerio, el Diocesano nombraría una Junta que le rendiría cuenta como responsable ante el Ministerio (art.3). En caso de que el presupuesto de la obra exceda de 12.000 reales fuese el edificio de un mérito artístico especial, el examen de la obra y la formación del presupuesto se verificarán por un arquitecto de la Academia de Nobles Artes de San Fernando, nombrado asimismo por el Diocesano (art.4), pasando el expediente al Gobernador Civil de la provincia, *para que, reunidos los datos necesarios, haga las observaciones que estime convenientes, así respecto a la necesidad de las obras, como sobre el coste del presupuesto y las más acertada ejecución de aquellas* (art.5). Una vez aprobado el presupuesto de reparación por el Ministerio de Gracia y Justicia, el Diocesano nombraría una Junta, que estaría compuesta por personas que se distinguieran *por piedad, celo y pureza*, que se encargarían de realizar las obras de manera más adecuada y conveniente (art.6), rindiendo ésta cuenta a su vez al Diocesano, quien después de darle su aprobación sería remitido al Ministro de Gracia y Justicia un resumen de la inversión de caudales con copia de su decreto de aprobación (art.7).

**1.3.2.4. La tutela de la restauración de los inmuebles religiosos monumentales durante la etapa de la Unión Liberal: La impronta del Convenio de 1859 y la promulgación del Real decreto de 4 de octubre de 1861.**

En el Convenio de 1859 se establecería claramente que el Gobierno se obligaba a pagar los gastos de reparaciones de edificios, por lo que se mantenía lo acordado en el Concordato de 1851, obligándose el Estado a construir a sus expensas las nuevas iglesias que se consideraran necesarias. Como proyección del artículo 36 del Concordato de 1851 y en el art.13 del Convenio de 1859, de proveer a los gastos de las reparaciones de los templos y demás edificios consagrados al culto, por necesidad sería promulgado el **Real Decreto del 4 de octubre como 1861**, que como según la Exposición de Motivos, que a pesar de *haberse cumplido hasta hoy las obligaciones contraídas en los citados Convenios con la Santa con la mayor puntualidad posible, habiéndose consignado en el presupuesto ordinario de cada año, y en los extraordinarios de los tres últimos, cantidades de entidad con destino a tan preferente atención del servicio religioso del país, y habiéndose entregado ya todas ellas a los Prelados que las administran e invierten con el mayor celo y con la más exquisita diligencia, la forma en que se ejecuta la distribución de estos fondos deja demasiada latitud al Ministro de Gracia y Justicia, que puede no obrar siempre con todo el acierto debido por carecer de una noticia exacta de las obras que son más urgentes e indispensables en la nación o en cada diócesis, y es necesario buscar el medio de proporcionarse el conocimiento de este importantísimo extremo.* La causa primordial radicaba en que *los decretos de 19 de setiembre de 1851 y en 12 de junio de 1857, al determinar las principales formalidades que se han de observar para la instrucción de los expedientes que versen sobre edificación y reparación de las iglesias parroquiales y de las iglesias y casas de Religiosas, nada dicen respecto a aquellas que han de guardarse para instruir los expedientes sobre edificación o reparación de los templos catedrales y colegiales, de los palacios episcopales, de los seminarios conciliares, y de las iglesias y casas de Religiosos, y no prescriben reglas para que el Gobierno de V.M. pueda apreciar la mayor o menor urgencia de las obras, ni dictan medidas suficientes para que pueda conocer minuciosamente la inversión que se da a los fondos aplicados a tan interesante objeto, por lo que había que aprobar otro decreto ampliatorio de los indicados, que se refundiesen en el nuevo, limitándosela excesiva latitud que existe en la distribución de los fondos aplicados a la edificación y reparación de las iglesias parroquiales; se adopten las disposiciones conducentes a conseguir un conocimiento exacto de la mayor o menor urgencia de las obras en toda la nación y en cada una de las diócesis; se marquen los medios de proporcionarse una noticia circunstanciada de la inversión que se haya dado a los fondos entregados por el Estado, y se determine la uniformidad de la instrucción de los expedientes para edificar y reparar los templos catedrales, colegiales y parroquiales, los palacios episcopales, los seminarios conciliares y las iglesias y casas de Religiosos y Religiosas.* Una primera novedad sería la clasificación de los gastos referente a la reparación de los templos catedrales, colegiales y parroquiales, de los palacios episcopales, de los seminarios conciliares y de las iglesias y casas de Religiosos y Religiosas, en ordinarios y extraordinarios, considerándose como gastos ordinarios *aquellos que en cada año sea necesario hacer para tener en buen estado de conservación los edificios, y que puedan cubrirse con las dotaciones consignadas en los artículos 34 y 35 del Concordato de 1851 para gastos de culto*



*catedral, colegial y parroquial y de los seminarios conciliares, con la parte de la renta que se devengue en la vacante de las Sillas episcopales que debe destinarse a reparar los palacios de los Prelados, según lo determinado en el artículo 37 del citado Convenio, y con las cantidades que de limosna se recauden en cada diócesis con destino a este fin, y gastos extraordinarios todos los que no puedan ser atendidos y cubiertos por los medios indicados, y cuyos fondos tenga que suministrar el Estado (art.1). La diferencia de modalidad del gasto subrayaba la distinción tutelar de la restauración ya que en el caso de que fueran gastos ordinarios de reparación de los templos catedrales, colegiales y parroquiales, de los palacios episcopales, de los seminarios conciliares y de las iglesias y casas de Religiosos y Religiosas se gestionarían en manos de la potestad eclesiástica, o sea por los respectivos Cabildos, Párrocos, Prelados y Superiores de las Casas de Religiosos y Religiosas, subrayándose que se haría con entera libertad, sin otra vigilancia ni intervención que las de sus propios Ordinarios (art.2), mientras que los gastos extraordinarios de reparación serían costeados por el Estado (art.3).*

Otra novedad importante que va a aparecer con la promulgación del **Real Decreto del 4 de octubre de 1861**, sería la descentralización de en la distribución de los fondos designados para las reparaciones de los templos, ya que hasta este momento se centralizaba en manos del ministerio de Gracia y Justicia, por lo que fue designado la configuración de las llamadas Juntas Diocesanas, compuesta del M.R. Arzobispo o R. Obispo, Presidente; del Deán, de un canónigo nombrado por el Cabildo, del Fiscal de la Audiencia del territorio, si esta estuviere en aquella capital, o del Promotor fiscal del partido si no lo estuviere, del Síndico del Ayuntamiento, y de un individuo o un delegado de la Comisión de monumentos artísticos nombrado por la misma (art.4). Entre otras atribuciones, la Junta tendría que informar en todos los expedientes de reparación (1º), recibir y custodiar los fondos (2º), mandar un resumen de inversiones al ministerio de Gracia y Justicia, con copia de su decreto de aprobación y la del Gobernador de la provincia (8º) y formar en los primeros meses del año dos relaciones, una de templo y casas conventuales y otra de los seminarios conciliares y palacios episcopales que estén en obra, y para los cuales se hayan consignado fondos para el Gobierno, expresivas las dos, del estado en que se halle cada una de las obras emprendidas (...) del tiempo que se calcule para su definitiva terminación; de los templos o edificios que necesiten terminarse más inmediatamente, y de aquellos cuya reparación deba ser comenzada sin dilación, calificando las obras con las palabras de *urgentísimas* y *urgentes* (9º). Al mismo tiempo sería nombrado en cada pueblo en que hubiera necesidad de edificar o reparar algún templo, casa o iglesia de Religiosos o Religiosas, una Junta subalterna dependiente de la Junta de diócesis, que estarían compuestas para las iglesias parroquiales, del Cura párroco, Presidente; del Alcalde; del Primer Teniente de Cura o coadjutor, donde lo hubiere; del Procurador Síndico y de los dos feligreses que mayor limosna hubieren ofrecido para la ejecución de la obra, haciendo de



depositario-administrador de los fondos la persona de arraigo y probidad que la Junta elija; y para las iglesias y casas de Religiosos y Religiosas, del Superior de aquellos o del Capellán de estas en su caso, Presidente; del Cura párroco; del Alcalde, y del Procurador Síndico, haciendo también de administrador-depositario de los fondos la persona de arraigo y probidad que la Junta designe (art.5). Entre sus atribuciones estarían llevar cuenta y razón de todo lo que se refiera a cada una de las obras en que intervengan (5.1) dar a las Juntas de diócesis, semestralmente, o antes si ellos lo piden, partes exactos y puntuales del estado en que se hallen las mismas obras (5.2) y rendir a las Juntas de diócesis cuentas documentadas de las sumas recibidas y de las invertidas en la ejecución, tan pronto como las obras se hayan terminados (5.4). En función a la cuantía económica aportada por el Estado, dependería la intervención administrativa, por lo que para las solicitudes de fondos para gastos extraordinarios de edificación y reparación de los inmuebles eclesiásticos que serían dirigidos al Prelado diocesano por los Cabildos respecto a los templos catedrales y colegiales; por los Párrocos y por los Ayuntamientos de cada pueblo respecto a las iglesias parroquiales, y por los Superiores de las casas de Religiosos y Religiosas respecto a esta (art.6). Si el presupuesto no excediera de 4000 reales y el edificio no sea de un mérito artístico especial, el propio Prelado instruirá un breve expediente, en que ha de informar un Alarife, Maestro de Obras o Aparejador de reconocida capacidad y honradez, de cuyas circunstancias le informarán los mismos Cabildos, Párrocos, Alcalde de la población o Superior de la comunidad; y acompañado del pliego de condiciones que para la ejecución de la obra ha de redactar el propio Alarife, lo remitirá con su dictamen y el de la Junta de diócesis al Ministro de Gracia y Justicia para la resolución que proceda (art.7), mientras que en las obras que excediesen de 4.000 reales y que no pasen de 20,000, el Prelado, inmediatamente después de recibir las solicitudes, las pasará a la Junta de diócesis, que en la primera sesión próxima designaría el Arquitecto que haya de estudiar la obra que deba ejecutarse, quien procedería a levantar los planos si de ellos hubiere necesidad, y a redactar el pliego de condiciones bajo los cuales se habrá de sacar a pública subasta. El expediente instruido será informado por la Junta de diócesis, remitiéndolo luego el Prelado con su dictamen al Ministro de Gracia y Justicia para la resolución que corresponda (art.8). En caso de que el presupuesto de la obra excediere de 20000 reales, el Prelado, una vez oído la Junta de diócesis, pasará el expediente al Gobernador de la provincia una vez oído el parecer del Arquitecto de la misma, en el término de un mes. Una vez devuelto el expediente por el Gobernador al Prelado lo remitirá este con su opinión al Ministro de Gracia y Justicia para la resolución conducente (art.8).

Unos meses después sería promulgada la **Real orden de 5 de octubre de 1861** aprobando la instrucción para llevar a efecto el Real decreto sobre formalización de los expedientes de reparación de templos, que se completaría

con la **Real orden de 6 de marzo de 1866** dictando varias disposiciones relativas a los expedientes de edificación o reparación de templos. (Colección, 1º semestre de 1866, Tomo XCV, 1866, pp.124-125). La causa de su promulgación aparecía recogida en la Exposición de Motivos de esta última, al alegar que las juntas de diócesis descuidaban *el puntual y exacto cumplimiento de la disposición 9º del art.4º de aquella soberana resolución, y sería en verdad lamentable que la morosidad o incuria de algunas de ellas pudiera dar lugar a que no se atiendan con oportunidad las verdaderas y apremiantes necesidades de que se trata, y a que el Gobierno se halle en la imposibilidad de dar cuenta, con arreglo a la ley que así lo ordena, de la justa y provechosa inversión de las cuantiosas sumas facilitadas por el Tesoro público para este servicio*, por lo que se dispondría que los Prelados excitasen el celo de las juntas de diócesis para que con toda urgencia remitieran al Ministerio, un estado con arreglo al adjunto modelo, en el que se consignará los datos y noticias siguientes: Nombre de la diócesis; nombre del pueblo a que corresponda el templo o casa de religiosas; clase de obra que necesite; fecha de la aprobación del expediente; importe del presupuesto; cantidades libradas por el Tesoro; importe de la prestación vecinal; importe del fondo de reserva; nombre del contratista; o si se hacen las obras por administración; época en que se comenzaron; su estado actual; terminación probable; causas de su paralización; cantidades invertidas hasta la fecha; obras terminadas; estado de las cuentas; sobrantes de fondos; persona o corporación en cuyo poder obren; observaciones generales.

### **1.3.3. Los límites del tráfico jurídico del Patrimonio Monumental de propiedad eclesiástica: El Real Decreto de 10 de abril de 1866.**

Durante los últimos años del periodo isabelino vamos a asistir a la promulgación de una serie de disposiciones normativas que limitaban el tráfico de los bienes eclesiásticos a raíz de la práctica común que se había comenzado a desarrollar en el ámbito de las parroquias. Desde la propia Iglesia reaccionó ante tal hecho, aunque de manera limitada, como lo demuestra la actitud que mantuvo el Arzobispo de Barcelona en su **Carta Parroquial de 20 de agosto de 1864**, por el que recomendaba a los presbíteros que conserven el patrimonio artístico e histórico conservado en las parroquias. Siguiendo la línea de otras Cartas Parroquiales que se irán sucediendo en otras archidiócesis, comenzaría definiendo el papel que el arte cristiano había tenido en la cultura española, al mismo tiempo que su interés puramente espiritual: *El espíritu del cristianismo, desde que llenó al mundo y vivificó la sociedad, no solo ha obrado un profundo cambio en las costumbres, en la legislación y en las condiciones de la humanidad, si que también se ha traducido de la manera más expresiva en las artes encargadas de representar las ideas y los hechos bajo un aspecto capaz de cautivar nuestros sentidos. El pincel cristiano, sobre todo, ha llenado esta noble misión, transmitiendo a las edades las acciones heroicas que immortalizan a los héroes de la Religión, no menos que al Artista que las ha hecho objeto de sus estudios. Y como el genio católico*

*ha sido el que ha inspirado principalmente las obras maestras que se han producido en este género, por esto es que la Iglesia ha protegido en todas épocas el arte de la pintura. Sus templos han ofrecido en sus bóvedas y retablos un edificante Museo o galería, donde han tenido cabida las más distinguidas obras de todas las edades. Nuestra nación, que en los días de apogeo religioso en su mismo seno los aventajados genios de Murillo, Alonso Cano, Zurbarán y Velázquez, ha debido también conservar en sus templos lo que es fruto de la idea y sentimiento religioso que en ellos aspiraron. Por ello no nos sorprende, al practicar la santa visita pastoral, que hallemos en las iglesias de nuestro obispado, aun en las poblaciones más insignificantes, hermosas tablas que decoran sus retablos, y representan los pasajes principales de la vida o martirio del Santo a quien están dedicados, y aun menos nos ha sorprendido que personas conocedoras de su mérito, pero que trafican con su conocimiento y la ignorancia del vulgo, hagan frecuentemente proposiciones de permutas ofreciendo retablos y estatuas que sobresaliendo por su riqueza tan útil para las artes como para la historia, oculta muchas veces en la oscuridad de una capilla o de una cripta.* Instaba por consiguiente a la labor que debía de hacer los presbítero del cuidado de dichos bienes, especialmente de aquellos retablos que podían perderse o deteriorarse con motivo de las obras que se estaban realizando en los templos, y en los casos en que por motivo de reparación, de ensanche y nueva construcción, pudiera ser este un motivo para colocar en la obra nueva distintos retablos de los antiguos, por no acomodarse estos a las nuevas dimensiones, los Párrocos y juntas de obra, se prohibía la enajenación *delos antiguos sin nuestro permiso, que solo otorgaremos cuando no tengan mérito alguno ni ofrezcan recuerdos notables* (1º), al igual que en los casos que no pudiera colocarse en la obra nueva los antiguos retablos, se colocarían en otro punto o lugar de la misma iglesia que sea conveniente y no fueran perjudicado a los títulos o imágenes a quien estuvieren dedicados (2º), y cuando ya no pudieran conservarse los antiguos retablos en la forma de tales, los Párrocos cuidarán de recoger las tablas en que haya alguna pintura, colocándolas en la sacristía o en otro punto en que puedan conservarse (3º), e incluso aunque hubiera cualesquier ventajas, fueran aparentes o reales, que se ofrecieran por los antiguos retablos o sus fragmentos, los Párrocos no podrían enajenarlos de manera alguna sin nuestro permiso, que en su caso lo haría *ensanta visita y fuera de ella por informes de personas inteligentes* (4º)<sup>2280</sup>.

En el **Real Decreto del 10 de abril de 1866** se dirige el Ministerio de Gracia y Justicia a los Obispos de España sobre la conservación de las bellezas que encierran los monumentos religiosos nacionales, por lo que se pedía *que el clero de la diócesis contribuya por su parte a la realización de dicho propósito, no disponiendo de los objetos artísticos o arqueológicos que existan o sean descubiertos en las iglesias o sus dependencias, sin previo conocimiento de las Academias de Bellas Artes o de las Comisiones Provinciales de Monumentos*. En la **Real Orden Circular de 6 de noviembre de 1867** se pedía a los arzobispos y obispos que facilitase cualquier objeto sin uso u

---

<sup>2280</sup> El arte en España, Vol.3, Imprenta M.Galiano, Madrid, 1865, pp.318-319..

aplicación, meramente artístico y con carácter de antigüedad, que existiesen en las iglesias, remitiéndose posteriormente el 17 de diciembre y reiterándose el **9 de junio de 1868**. Sin embargo, los destinatarios se negarían muy sutilmente a esta petición, por lo que no pusieron obstáculos a la demanda, pero hicieron constar que todos los objetos eran necesarios para el culto. Consta documentalmente de la negativa de los prelados de Toledo, Burgos, Santiago de Compostela, Calahorra, Tortosa, Tarragona, Badajoz, Granada, Lugo, etc.<sup>2281</sup>.

#### **1.4. El Patrimonio Real Monumental como Patrimonio Nacional: La desvinculación de las colecciones reales de la Corona.**

En el periodo isabelino la situación patrimonial de la Corona en principio no estaba clara, ya que debido a la irrupción de las medidas desamortizadoras se hacía urgente distinguir entre los bienes del Estado y los del Real Patrimonio, sobre todo a partir de las leyes derogatorias de los vínculos y mayorazgos. La confusión que se estaba viviendo en estos años sobre el Patrimonio de la Corona lo recoge el propio Colmeiro al lamentarse de la falta de leyes que pudiera impedir que el rey pudiera enajenar los bienes del real Patrimonio, al constituir el mayorazgo de la Corona, aunque reconocía que a pesar de ello, los reyes seguían haciendo donaciones sin previa autorización legislativa. En el caso del Patrimonio Monárquico Monumental, a la muerte de Fernando VII las colecciones de obras de arte y enseres de los palacios de Madrid y sitios reales fueron declarados bienes libres, y por ellos heredados por Isabel II, su hermana infanta Luisa Fernanda y por la reina viuda Doña María Cristina. En este patrimonio privado, se encontraba las pinturas y esculturas del Museo del Prado. A lo largo del reinado de Isabel II se intentó solventar esta problemática en varias ocasiones que dio lugar al proyecto de decreto del 22 de noviembre de 1845, que culminaría con la promulgación de la ley del 12 de mayo de 1865.

##### **1.4.1. Una primera vinculación del Patrimonio Monumental Regio a la Corona en la Década Moderada: El proyecto de decreto del 22 de noviembre de 1845 por el que vinculasen a la Corona los palacios reales, museos, sitios, posesiones, derechos y bienes estables que eran propiedad privada de Isabel II.**

Los tres miembros de la Comisión presentaron un proyecto de decreto, por el que se declaraban vinculados a la Corona, y por ello no enajenables ni partibles, los palacios reales, museos, sitios, posesiones, derechos y bienes estables que poseía entonces la soberana, que venía poseyéndose como pertenecientes a la Real Casa<sup>2282</sup>. El contenido del proyecto no deja menor duda sobre la intención de convertir estos bienes del Patrimonio Monárquico

<sup>2281</sup> FRANCO MATA, Angela, 1993, p.304.

<sup>2282</sup> ANES, Gonzalo, 1996, p.107.

Monumental en vinculables a la Corona, un paso importante para su posterior transformación en auténticos bienes nacionales: “Luego que por un señalado beneficio de la Divina Providencia logré reunirme con mi muy querida Madre, por excitación de esta Excelsa Señora, de nuestro común acuerdo y con el de mi muy amada hermana la infanta Doña Luisa Fernanda, nombré una Comisión de personas de nuestra mayor confianza que examinase las particiones de la herencia de mi Augusto Padre (q.e.p.e.) practicadas durante mi menor edad y me propusiesen los defectos que advirtieran en ellas y la manera de subsanarlos. La Comisión, evacuado su encargo, me consultó lo conveniente, y habiéndome conformado con su parecer, he venido en resolver entre otros puntos lo que sigue: Declaro vinculados a mi Real Corona, y por tanto inenajenables y no sujetos a partición entre mis herederos ni de los de mis sucesores al Trono: Los reales palacios, museos, sitios, posesiones, derechos y bienes estables que actualmente poseo y vienes poseyéndose y administrándose como pertenecientes a mi Real Casa y Patrimonio. Las pinturas, estatuas y demás preciosidades artísticas y naturales de la misma procedencia que en dichos sitios y edificios se custodian. Los muebles y demás objetos de adorno que, por estar adheridos a dichos edificios o destinados perpetuamente a su ornato y decoro deben estimarse como parte integrantes de ellos. A raíz de esta propuesta, se estableció por el Real Decreto de 25 de noviembre de 1845, que quedase igual hasta que contrajese matrimonio la infanta Luisa Fernanda.

#### **1.4.2. La herencia de Doña María Cristina y el destino de algunos bienes históricos-artísticos no vinculados a la Corona.**

A pesar de los acuerdos llevados a cabo en 1845 sobre la testamentaría de Fernando VII, siguió existiendo una amplia polémica como lo demuestra el hecho de que algunos bienes históricos-artísticos quedaron en principio desvinculados de la Corona, por lo que en las Cortes Constituyentes de 1854 fueron examinados los problemas que planteaba la testamentaría. Los abogados de la Reina doña María Cristina, Manuel Cortina, Juan González Acevedo y Luis Díaz Pérez, señalaron que la voluntad de vincular algunos bienes no se presume sino que tenía que estar consignado en algún documento fehaciente. Al referirse a las colecciones reales de pinturas y esculturas se puntualizaba que *no hay ni puede reconocerse base alguna legal para dejar de considerar los objetos del Real Museo como libres. Y esta cualidad que sólo puede desaparecer vinculándolos, no la han perdido ni por ser muy preciosos y de mucho valor, ni por estar coleccionados, ni por haber sido adquiridos con tesoros sacados del país. Si ésta fuera la regla de decisión, ningún objeto de la propiedad de los Reyes podría dividirse: todos han tenido igual procedencia; todos han sido pagados con el mismo caudal; todos constituyen un conjunto de riquezas que no son menos apreciables porque se hallen en un edificio llamado palacio, que si estuvieran en otro calificado de museo.* Como señala Gonzalo Anes, la testamentaría de Fernando VII dio lugar a un inventario en el que se

reconocía que estaba mal hecho, al no distinguir debidamente en el mismo los bienes libres respecto a los incorporados a la Corona. Sin embargo, no cabe duda que la doctrina vigente anterior a 1834 era la expuesta por los abogados de Doña María Cristina: que no había reglas, leyes, ni principios que rigiesen en las testamentarias de los Reyes de España, por lo que Fernando VII tenía toda la libertad para poder vincular o desvincular aquellos bienes que estimase oportuno, por lo que consideró que los bienes muebles tenía que estar incluidos en la partición correspondiente a su esposa para que pudiera vivir con el decoro propio de una Soberana.

#### **1.4.3. La desvinculación de las colecciones reales de la Corona durante la última etapa del periodo isabelino. La ley de 12 de mayo de 1865.**

Tras la muerte en 1833 hizo avecinar el peligro de la desaparición del Museo –como efecto de su titularidad privada–, que podía ver disgregados sus ricos fondos entre los diversos herederos, al estar la colección sometida a un régimen jurídico de libertad testamentaria. De hecho, se llegaron a tasar las posesiones del museo para hacer las particiones entre las herederas y a punto se estuvo, en el traspaso de poderes, aunque finalmente se resolvió que fuese a parar íntegro a manos de Isabel II, cambiando su denominación por la de Real Museo de Pinturas y Esculturas de Su Majestad. Pero la tranquilidad sobre su futuro no será completa hasta 1865, momento en que la reina hace cesión de sus derechos patrimoniales a la corona, deshaciéndose finalmente esa enojosa confusión tan propia del Antiguo Régimen entre rey y Estado. La medida se completará cuando la revolución de 1868, adopte la tranquilizadora decisión de nacionalizar el museo, integrándolo en el patrimonio público estatal, y alejándose definitivamente el fantasma de su dispersión en razón de las desavenencias familiares. Será entonces cuando pasa a llamarse sencillamente Museo Nacional del Prado<sup>2283</sup>. Con el objeto de que no se volviera a repetir la cuestión de la herencia real, como había ocurrido con el testamento de Fernando VII, así como que se perdiera por consiguiente, las colecciones artísticas del patrimonio regio, que formaban parte de su propio boato, más aun cuando en este momento resultaba imposible adquirir bienes muebles necesarios para decorar los palacios reales, debido a la penuria económica que estaba viviendo en este momento el país, la propia Reina Isabel II quiso vincular a la Corona, las obras de arte que hasta este momento habían sido de su exclusivo patrimonio. De esta manera don Francisco Goicoerrotea, intendente de la Real Casa y Patrimonio, secundando la iniciativa de la Reina, propuso a la Reina una ley en la que se permitiese fijar definitivamente cuales serían los bienes que quedaban vinculadas a la Corona, para que no pudieran ser divididos entre herederos ni enajenados. La buena intención de la Reina quedaría recogida en el propio preámbulo de la Ley: *La magnánima iniciativa de Su Majestad, aseguraba para el perpetuo esplendor del Trono, cuantiosas riquezas*

<sup>2283</sup> BOLAÑOS, María, 1977, p.177



*artísticas e históricas, para lo que renunciaba a importantes derechos que a su real patrimonio privado y a la herencia de sus augustos hijos corresponderían. Al mismo tiempo se solventaría los problemas que había planteando el testamento de Fernando VII, ya que con el cambio político-jurídico que se había producido en estos años del periodo isabelino, al haberse superado el régimen político del Antiguo Régimen, en el que en el propio preámbulo del proyecto de ley, se aludía a los peligros y temores de que saliesen de la Corona ricos tesoros de arte, por lo que, siguiendo a Gonzalo Arnes, se reconocía que gracias a la generosidad de la Reina no se dividieron las colecciones reales de obras de arte ni el mobiliario y enseres de los palacios de Madrid y sitios reales. Las pinturas y esculturas depositadas en el Real Museo pudieron continuar en él, y acrecentarse con nuevas piezas y colecciones, como el llamado Tesoro del Delfín, y con los cartones de la Real Fábrica de Tapices. La liberalidad de la Reina consistió en desprenderse de pinturas, piezas escultóricas, tapices y otros bienes muebles que eran de su exclusiva propiedad. Quiso vincularlos a la Corona, con los que revertieron al pleno dominio del Estado. Con ello se privó de la posibilidad de enajenarlos o de distribuirlos entre sus herederos, como podía haber hecho si lo hubiese conservado como propiedad privada suya*<sup>2284</sup>. La Comisión del Congreso de los Diputados, en el dictamen que emitió el 18 de abril de 1865 sobre el proyecto de ley relativo al patrimonio real, recordó que habían distribuidos entre las tres herederas de Fernando VII las pinturas del Real Museo y otros efectos estimables, como bienes de libre disposición, por lo que la propia Reina tuvo que abonar de su peculio el tanto de sus partes respectivas a su madre y a su hermana<sup>2285</sup>.

Con la publicación definitiva de la **ley de 12 de mayo de 1865**, las colecciones reales quedaban vinculados a la Corona los palacios y sitios reales y el museo de pinturas y esculturas, entre otros objetos enumerados en el título I. Al vincular a la Corona el Real Museo, todas las pinturas y esculturas depositadas en él dejaron de ser propiedad privada de la Reina para revertir a la nación. En su Título I se haría la designación de los bienes del Patrimonio de la Corona a modo de inventario: Palacio Real de Madrid, con sus caballerizas, cocheras, parques, jardines y demás dependencias; la Armería Real; el Real Museo de Pinturas y Esculturas; los reales Sitios del Buen Retiro, la Casa de Campo y la Florida, del Pardo y San Idelfonso, de Aranjuez y de San Lorenzo; los Palacios Reales de Valladolid, Barcelona, Palma de Mallorca y el Castillo de Bellver; el patronato del Monasterio de las Huelgas de Burgos con el hospital del Rey; el patronato del convento de Santa Clara de Tordesillas, y los demás patronatos y derechos honoríficos que pertenecen a la Corona, como también todos los muebles y semovientes contenidos en los palacios y predios citados. En el Título II se insertaban aquellos bienes que iban a ser segregados del Patrimonio Monumental, como fueron los cuarteles de los Sitios Reales que estuviese destinados al aposentamiento de tropas y la parte del Buen Retiro

---

<sup>2284</sup> ANES, GONZALO, 1996, p.114.

<sup>2285</sup> ANES, Gonzalo y ALVAREZ DE CASTRILLON, *Economía, sociedad, Política y Cultura en la España de Isabel II*, Real Academia de la Historia, 2004, pp.127-128.

destinada a la vía pública, siendo declarados en estado de venta. En el Título IV se declaraba el carácter indivisible del Patrimonio de la Corona, siendo los bienes que lo constituían inalienables e imprescriptibles, no pudiéndose sujetarse a ningún gravamen real ni a ninguna otra responsabilidad (art.5). Sin embargo, se le atribuía al Rey una libre disposición en cuanto a las alteraciones, reparaciones y reedificaciones que estimase adecuado a su conservación y embellecimiento. Al mismo tiempo la herencia de los bienes del Patrimonio de la Corona, una vez muerto el monarca, sería del propio heredero, por la vinculación a la Corona. Junto a este patrimonio de la Corona, el rey era titular del patrimonio de su caudal privado, que adquiere en virtud de la facultad que se le reconoce, como el resto de los ciudadanos, de adquirir toda clase de bienes por cuantos títulos estableciere el Derecho. En este ámbito podríamos situar aquellos bienes históricos-artísticos que la Reina adquiriese a título particular, y no entrara a formar parte de aquellos vinculables a la Corona. Uno de los instrumentos administrativos que se van a utilizar en esta nueva realidad jurídica de los bienes del Patrimonio de la Corona sería la elaboración de un inventario, tal como aparecía regulado en el artículo 29 de la Ley<sup>2286</sup>. Fernando Cos-Gayón, que fue Secretario general de la Casa Real entre 1862 y 1868 en un comunicado publicado en *La Epoca* el 28 de abril de 1874, a modo de balance defendería el contenido de la ley de 1865 en estos términos: *La Ley de 12 de mayo de 1865 tuvo por objeto, primero, terminar por medio de una transacción que la generosidad de la Reina facilitó, las cuestiones de derecho, sumamente complejas y difíciles, sobre el Mayorazgo patrimonial y sobre la fortuna privada de los Reyes*<sup>2287</sup>. Como apunta López Rodo a modo de síntesis, la ley de 1865 supone la primera garantía de que los Museos y monumentos artísticos se conservan para el Estado, aunque vinculados al Patrimonio de la Corona<sup>2288</sup>.

### **1.5. El documento histórico como bien de interés general en la España Isabelina: La génesis del sistema archivístico público de interés histórico.**

#### **1.5.1. Una incipiente tutela pública del Patrimonio Documental en la Década Moderada: La génesis de las Bibliotecas Públicas y el derecho de acceso a la información de los documentos históricos por parte de los particulares: La Real Orden de 20 de abril de 1844.**

Las creadas Comisiones Provinciales por Real Orden de 13 de junio de 1844 tendrían como uno de sus objetivos reunir los libros, códices, diseminados en la provincia, reclamando los que hubieran sido sustraídos y puedan descubrirse. La nueva sección de bibliotecas-archivos de las comisiones provinciales tendría como competencia la formación de bibliotecas,

<sup>2286</sup> LOPEZ RODO, L. 1954, pp.196-201.

<sup>2287</sup> *La administración de los Sitios Reales en el siglo XIX: jardineros e ingenieros de bosques en Historia, Clima y paisaje. Estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López Gómez*, Universidad de Valencia, 2004, p.129.

<sup>2288</sup> MERLOS ROMERO, María Magdalena "Patrimonio inmueble de Aranjuez: su evolución en el siglo XIX" *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie VII, Historia del Arte, Año 1995, n.8.

cuidando de aumentarlos con los manuscritos y obras que vayan adquiriéndose, para lo que tendrían que ponerse con los encargados de Amortización, procurando reunir todos los códices, manuscritos y demás documentos que tengan relación con las ciencias, la historia y la literatura, cuya primera procedencia serían de las bibliotecas exclaustradas. En un gran número de enclaves geográficos del territorio nacional se fueron ubicando en las bibliotecas provinciales, cuyos volúmenes procederían de las bibliotecas conventuales extinguidas. De esta manera la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, constituido el 28 de junio de 1844, comenzaría a reunir en el seminario conciliar los libros conventuales, o la biblioteca nacida a instancia de los volúmenes de la extinguida biblioteca del Monasterio de Guadalupe. A raíz de la Real Orden de 24 de septiembre de 1844 se dispuso que los libros de los conventos extinguidos pasaran a las bibliotecas universitarias de la ciudad que la poseyera, como ocurriría en Zaragoza. En las Instrucciones de 28 de junio de 1859 dadas por el Marqués de Corvera, entonces Ministro de Instrucción Pública, dirigidas a los gobernadores civiles se reconocían que después que malograda la coyuntura de conservar y distribuir con acierto los tesoros que en sus archivos y bibliotecas encerraban los extinguidos monasterios y conventos, es de la mayor importancia guardar, clasificar y organizar sus últimos despojos<sup>2289</sup>;

A raíz de la **Real Orden de 20 de abril de 1844** se establecen las reglas para acceder a los archivos del Estado, siempre que fueran investigadores, que los documentos fueron datados hasta el siglo XVIII y no afectasen a la intimidad de la monarquía, a los secretos del Estado y a la integridad y seguridad de la Nación. Como apunta Severiano Fernández Ramos constituye la primera *noma que establece una completa reglamentación de carácter general, no circunscrita a un archivo completo, sobre esta materia. En síntesis, la norma circunscribe el acceso a los depósitos puramente literarios y a los papeles puramente históricos anteriores a 1700 —es decir, precisamente desde la fecha de la ascensión a la Corona Española por la Casa de los Borbones—. Respecto a los documentos puramente históricos de menor antigüedad, la Real Orden prohibía terminantemente su registro, ni mucho menos copiar. Pero incluso dentro de la categoría de documentos históricos anteriores a esa fecha se consideraban reservados determinados documentos, de cualquier época que fueran, que tratasen sobre determinados aspectos de interés del Estado y sobre la vida privada de los gobernantes, así como aquellos que afectasen particularmente a corporaciones, familias e individuos. El acceso a estos documentos necesitaba de una especial autorización, una específica real licencia. Incluso aquellos documentos que podían comprometer los intereses nacionales eran calificados de muy reservados, con la consecuencia de que no constaba en el registro general del archivo. En definitiva, la norma presenta la importante innovación de suprimir la necesidad de que los investigadores obtengan un permiso real para acceder a una serie de documentos. Y*

---

<sup>2289</sup> GARCIA EJARQUE, Luis, *Historia de la lectura pública en España*, Gijón, Trea, 2000.

*aunque las restricciones son amplísimas, no por ello debe minusvalorarse la importancia de esta disposición, que supuso llanamente la apertura de los archivos del Reino a los investigadores, aligerándose en cierta medida la situación de dependencia del favor real, el cual quedará restringido a los documentos considerados reservados*<sup>2290</sup>. En la Exposición de Motivos se establecía que *con motivo de las licencias solicitadas por nacionales y extranjeros para registrar los archivos del Reino y tomar de ellos apuntes y copias de los documentos que encierran, ya para ilustrar la historia, ya con diferente objeto, S.M. ha tomado en consideración este importante asunto, y penetrada de que el estado actual de la civilización no permite tener cerrados a la investigación de las personas ilustradas estos preciosos depósitos, pero que tampoco el interés del Estado consiente se franqueen indiscretamente a todos los que deseen penetrar sus secretos, deseando que se establezcan reglas generales para huir de entreambos extremos y para que sepan todos a qué atenerse en este punto.*

### **1.5.2. Un nuevo ensayo de institucionalización administrativa del Patrimonio Documental durante la Unión Liberal: La creación del Archivo Central por el Real decreto de 17 de junio de 1858.**

Durante el periodo de la Unión Liberal se pone las bases de una verdadera red de archivos regionales, iniciado anteriormente en la etapa anterior, con la fundación del de Mallorca en 1851, a las que se unirían el de Galicia en 1859 o el de Valencia en 1861. Al mismo tiempo seguían estando en uso el Archivo de Simancas<sup>2291</sup>, nacido a raíz de la transferencia de documentación de la Corona de Castilla y el Archivo general de Indias fundado en 1775, que recogería los fondos documentales de la administración colonial de las Américas. De carácter trascendental sería la promulgación de **la Real Orden de 11 de agosto de 1850** por el que se ponía los fondos de las casi tres mil ordenes suprimidas en el ámbito nacional al cuidado de la Real Academia de la Historia, por lo que pasaban de ser unos archivos puramente administrativos en el seno de las ordenes a convertirse en un patrimonio nacional cuya utilidad estaría fundamentada en la reconstrucción de amplias páginas de la historia nacional debido al amplio papel que habían desempeñado las propias órdenes. Sin embargo, no es hasta la promulgación del **Real Decreto de 17 de julio de 1858**, cuando nazca el Archivo General Central, que tendría en su origen un doble carácter histórico y administrativo<sup>2292</sup>. Su creación como apunta Pedro López Gómez fue *la consecuencia lógica de la falta de funcionalidad del Archivo de Simancas, convertido en custodio de documentos históricos o de menor relevancia administrativa, pues incluso en la última época de*

<sup>2290</sup>FERNANDEZ RAMOS, Severiano *El derecho de acceso a los documentos administrativos*, Monografías Jurídicas, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp.283-284.

<sup>2291</sup>MARTINEZ GARCIA, Luis, "El Archivo de Simancas en el Antiguo Régimen: secreto, patrimonio, justificación y legitimidad real", *Boletín de Anabad*, Madrid, XLIX, n.2 (1999) 77-166.

<sup>2292</sup>LOPEZ GOMEZ, Pedro "La construcción de un sistema nacional de archivos (1858-1936)" en DE DIOS, Salustiano; INFANTE, Javier, ROBLEDO, Ricardo, TORIJANO, Eugenia (Coord.), *Historia de la propiedad. Patrimonio Cultural*. Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, Salamanca, 28-31 de mayo de 2002, p.215.

*los Austrias se había dejado sentir lo incomodo de su distancia, por lo que los documentos de mayor trascendencia y frecuencia de consulta habían permanecido en los Archivos de los Consejos, planteándose la necesidad de otro archivo más cercano a Madrid, si no en la propia capital.* En su Exposición de Motivos quedaba perfectamente ilustrada el nuevo matiz de funcionalidad que tendría el nuevo organismo: *Sin documentos que comprueben la historia; sin tesoros científicos y literarios no hay gloria para una nación; conservarlos y utilizarlos con oportunidad es de sus primeras glorias.* En su artículo 2º se formula la primera clasificación legal de los archivos públicos existentes, si bien limitadas a los archivos en que se custodien documentos históricos. Por su parte, el artículo 4º dispondría la remisión al Archivo Central de todos los papeles de carácter administrativo de las Secretarías de Despacho, cuando el transcurso del tiempo los haga inútiles para la instrucción de los negocios. Un interesante estudio de Carmen Crespo sobre la nueva institución, perfila que en el caso del Archivo General, a diferencia del de Simancas, los documentos van a tener más que un significativo valor administrativo, su interés de conservación va a ser meramente científico, erudito y humanístico, ya que los documentos que iba a recoger habían pertenecidos a instituciones extinguidas, especialmente de los conventos exclaustrados, muchas de las cuales habían quedado inservible administrativamente, por lo que la Academia de la Historia solicitó su custodia al considerar su valía histórica, que se le concedería por el R. O. de 26 de agosto de 1850, bajo los auspicios del ministro Bravo Murillo<sup>2293</sup>. En el artículo 3º del Decreto se disponía que debían reunirse los archivos de las cuatro órdenes militares, el de San Juan de Jerusalén, los de la Inquisición, y los de las Colegiatas suprimidas, y en el artículo 4º, se establecería que se incorporase los papeles administrativos.

Una nueva centralización administrativa de los	Fecha de promulgación	Fondos Documentales
Archivo General Central	Real Decreto de 17 de julio de 1858	Fondos documental de interés administrativos
Archivo Histórico Nacional	Real Decreto de 28 de marzo de 1866	Fondos documentales de interés histórico de los conventos suprimidos por las medidas desamortizadora
Archivo General de Indias	1775	Fondos documentales sobre la administración de las Indias provenientes del Archivo de Simancas, Central, etc.
Archivo de Simancas		Fondos documentales de los archivos de los consejos de Indias y Aragón a los archivos generales de Indias y Corona de Aragón, quedando como archivo de la Corona castellanoleonesa, con su consejo y Cámara de Castilla, quedando convertida en el primer archivo histórico español de los intereses de la corona castellanoleonesa.

<sup>2293</sup> CRESPO NOGUEIRA, Carmen “Los primeros cien años del Archivo Histórico Nacional” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, LXXIII, N.2, 1966, PP.285-319.



Finalmente, la configuración de los archivos provinciales tiene un claro matiz político, más que de custodia de un patrimonio documental integrado en el Patrimonio Monumental, ya que se ha ido marcando una tendencia hacia la regionalización, por lo que se van a potenciar los archivos municipales, y es que frente al centralismo de los moderados: unos territorios que es necesario potenciar, dar legitimidad, y que mejor modo de enriquecerlos cultural e históricamente con unos buenos archivos provinciales. Sin embargo, va a surgir una confrontación entre el poder central del Gobierno y los poderes locales de los municipios a la hora de organizar las fuentes documentales. Hasta este momento todos los ayuntamientos tenían que entregar al gobernador civil de su provincia los documentos, libros y papeles de sus archivos (esta medida fue fruto del proyecto del archivero del palacio real José de Güemes y Willame)<sup>2294</sup>.

### **1.5.3. La génesis del Archivo Histórico Nacional como reflejo del centralismo administrativo de la tutela del Patrimonio Documental: El Real Decreto del 28 de marzo de 1866.**

Durante la etapa isabelina se puede afirmar que se empieza a generar la existencia de los llamados patrimonios especiales, sin olvidar su matiz ideológico de carácter nacionalista, especialmente el Patrimonio Documental y Bibliográfico y el Patrimonio Arqueológico, momento en que se asiste a un cambio estructural en el ámbito de la archivística, al formularse los principios científico que definiría este campo de conocimiento en el ámbito contemporáneo<sup>2295</sup>. Además se añadieron una serie de factores que ayudaron a cambiar el perfil de la Archivística como el desarrollo de la crítica histórica, el arraigo de las ideas ilustradas, y sobre todo la influencia del nacionalismo y el romanticismo, por lo que se introduce una vertiente histórico-cultural en los archivos, que hasta ahora no existía, al ser un mero referente administrativo, por lo que se distorsionaba los llamados archivos administrativos y los archivos históricos. Los pilares de la nueva Archivística aparece nuevamente identificada con la ideología nacionalista del Estado Burgués, perfectamente sintetizado en el estudio realizado por R.Alberch: *El nacimiento de la archivística como ciencia coincide con la difusión de las corrientes de pensamiento que contribuyeron a la transformación de la sociedad feudal. Entroncado con una mayor toma de conciencia del hecho nacional, aparece entonces el concepto de soberanía, así como los principios básicos de*

<sup>2294</sup> CERDA DÍAZ, Julio, 1990, p.23.

<sup>2295</sup> Robert H. Bautier establece cuatro periodos en la evolución de la archivística: la época de los archivos de los palacios, es decir, la Antigüedad; la época de los cartularios correspondiente a la Edad Media (siglos XII-XV); la época de los archivos como arsenales de la autoridad, que abarca desde el siglo XVI hasta principio del siglo XIX y la época de los archivos como laboratorios de la historia, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. BAUTIER, R.H. *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des depots d'archives et la naissance de l'archivistique (XVI-début XIX siècle)*. Archivum, XVIII, París, 1968, pp.139-151.



*responsabilidad, garantía y justicia de la Administración hacia el administrado. En nuestro sector, los cambios obrados se materializaron en los procesos desamortizadores y la desaparición de muchos organismos propios del Antiguo Régimen, que pusieron en manos del Estado una ingente masa documental, y en la expansión de la estructura orgánica y administrativa de los gobiernos, que asumen ahora las funciones de sanidad, educación o economía, depositada antes en manos privadas, preferentemente la Iglesia*<sup>2296</sup>. Al respecto Julio Cerda Díaz puntualiza como *La utilización de los archivos como elemento legitimador del sistema político alcanza uno de sus más claros exponentes (...) es durante la llamada década moderada, en los momentos en que se cuestiona la legitimidad del nuevo régimen, cuando precisamente toma un primer y definitivo impulso el fomento de las actividades relacionadas con la investigación histórica, la base del desarrollo archivístico de las décadas siguientes. Una situación similar a la que estaba aconteciendo en Europa, en el contexto de las revoluciones liberales (...) En mayor o menor medida, el Estado logra sus pretensiones. Las colecciones documentales van siendo publicadas. Al poco tiempo de la creación de las Comisiones Provinciales, en 1850, se le ordena que centralice sus actuaciones en un solo ámbito, las fuentes documentales. Un importante salto cualitativo que pone de manifiesto el creciente interés del Estado por lo que en ese momento considera su más valioso patrimonio histórico, los documentos frente a los valores artísticos y monumentales de otros bienes históricos, da prioridad a los valores legitimadores, a las pruebas jurídicas que le puedan aportar los documentos medievales*<sup>2297</sup>.

Desde un principio la Academia de la Historia se vería desbordada por la amplia cantidad de material, por lo que solicitaría del Ministerio de Gracia y Justicia la creación de una Escuela Diplomática<sup>2298</sup> para preparar la formación de los futuros archiveros, como la fundada en 1821, l'Ecole des Chartres en París, en 1821, la Bayerische Archivschule en Munich (1821) y el Institut für Österreichische Geschichtsforschung en Viena (1854). Así, por el Real Decreto de 7 de octubre de 1856, nacería la nueva institución docente, que sería la única que en España proporcionaba una formación erudita a los historiadores, teniendo su inauguración oficial el 21 de noviembre de 1856, ubicándose en la Real Academia de la Historia. Siguiendo el modelo de L'Ecole de Chartes de París, su programa de enseñanza se articuló en las cátedras para las enseñanzas de antigüedades, historia y arte. Las enseñanzas impartidas en la Escuela serían reguladas en el Reglamento de 1856, la Ley de Instrucción Pública de 1857 y el Real Decreto de 23 de septiembre de 1857. Entre los docentes que impartieron clases en sus aulas cabrían destacar el ya citado Modesto Lafuente, autor de la *Historia general de España*, publicada

---

<sup>2296</sup> ALBERCH FUGUERAS, Ramón *Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento*. Barcelona, 2003, pp.36-37.

<sup>2297</sup> CERDA DÍAZ, Julio *Los archivos municipales en la España contemporánea*, Editorial Trea, 1997, p.62.

<sup>2298</sup> GODIN GOMEZ, Aurora "La Escuela Superior de Diplomática y la formación de los archiveros, bibliotecarios y arqueólogos en el siglo XIX", *Bole. Anabad*, 3, julio-septiembre, 1995, pp.33-50.

entre 1850 y 1867, Pedro de Felipe de Monlau y Roca (el primer director del Museo Arqueológico Nacional), Juan Ramón Mélida, etc<sup>2299</sup>. El Real Decreto de 15 de julio de 1863 ampliaría los estudios de arqueología con tres cátedras: Numismática general y especial de España, Epigrafía y Geografía antigua y de la Edad Media y la Historia de las Bellas Artes en los tiempos antiguos, Edad Media y Renacimiento. La nueva institución supuso un hito en el campo de la formación, ya que sería la encargada de formar a los funcionarios que iban a dedicarse a conservar y proteger los bienes históricos y organizar el patrimonio artístico y literario. En este sentido, cabe mencionar también la creación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, con el Real Decreto de 17 de julio de 1858, al que se añadiría, en 1867, la Sección de Anticuarios, pasando a denominarse Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, que se encargarían de las instituciones administrativas del patrimonio como las Bibliotecas, Museos o Archivos que estaban naciendo en estos años centrales del siglo<sup>2300</sup>. En el fondo con esta medida esta gestándose la concepción del llamado Patrimonio Documental y Bibliográfico. Siguiendo a Pasamar y Peiró, los alumnos se iniciaron en las técnicas modernas de la historiografía, para convertirse en verdaderos profesionales de la materia. Al mismo tiempo se estaba dando pasos importantes en la ciencia archivística, con la publicación de algunos excelentes tratados como fue el caso de la obra de Porras Huidrobo, *Disertación sobre archivos y reglas de su coordinación*; Troche y Zúñiga, *El archivo cronológico-topográfico* y el ya más tardío de Güemes y Wuillame, *Organización del Archivo de la Corona aplicada a los archivos particulares*, que daría a la luz en 1876, o el *Manual del Archivero*, de Rodríguez de Miguel de 1877<sup>2301</sup>. La clasificación y ordenación del material estarían inspirado en el llamado principio de procedencia que se había extendido en la práctica archivística europea, siguiendo los contenidos de la Circular de 24 de abril de 1841, firmado por el ministro francés Natalis de Wally: *El respeto al principio de procedencia forjado asincrónicamente por cada tradición archivística y conocido con denominaciones distintas, establece asimismo que los archivos de una misma procedencia no se deben de mezclar con los de otras procedencia (...)*<sup>2302</sup>.

Durante la segunda mitad del siglo XIX surgirían en toda Europa órganos especializados para la dirección de la política archivística, habiendo sido en un principio la Revolución Francesa la primera en desarrollar una política centralizadora en los creados *Archives Nationales*, que se formarían

<sup>2299</sup> PEIRO MARTIN, I., PASAMAR ALZURIA, G *La Escuela Superior de Diplomática (Los archiveros en la historiografía española contemporánea)*. Madrid, 1996.

<sup>2300</sup> MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo *Diccionario de la Administración española. Un estudio del archivero*, FERNANDEZ BAJON, María Teresa, *Políticas de Información y documentación en la España del siglo XIX*. Gijón, Trea, pp.22-23.

<sup>2301</sup> MENDO CARMONA, Concepción "El largo camino de la Archivística: De práctica a ciencia". *Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita*. Universidad de Alcalá de Henares, 2, 1995, pp.113-132.

<sup>2302</sup> En la Ilustración se había utilizado el principio por materia.

con los documentos de los Consejos, las grandes administraciones del Antiguo Régimen, abadías, cabildos e iglesias de París, a la que posteriormente seguirían su ejemplo Bélgica, Países Bajos e Italia. En el caso de la administración española, ya existía una administración preexistente en el siglo XVIII, que aunque no había servido de base para el que se creó en el siglo XIX, desempeñarían un papel posterior en la articulación de un verdadero sistema administrativo moderno, como fueron el Archivo General de Indias, cuya data fundacional estaría en 1775, el Archivo General de la Corona de Aragón, el más antiguo de los archivos reales peninsulares y el Archivo de Simancas. Durante la segunda mitad del siglo XIX asistimos a las bases de una verdadera centralización administrativa en el ámbito tutelar del patrimonio documental, el llamado centralismo archivístico, especialmente a raíz del *Real Orden de 6 de noviembre de 1847*, por el que se organiza la Junta Superior Directiva de Archivos, presidida por el propio Ministro y catorce miembros, con el fin de encargarse de la configuración de un verdadero sistema archivístico nacional, aunque quedaría suprimida al año siguiente, aunque al poco tiempo se va a intensificar la preocupación estatal por los archivos, como lo demuestra la promulgación de la Real Orden de 11 de agosto de 1850, por el que el Ministerio de Hacienda regido por Bravo Murillo, podría bajo responsabilidad de la Real Academia de la Historia los fondos archivísticos de las suprimidas comunidades religiosas.

A raíz de la promulgación del **Real Decreto de 28 de marzo de 1866 como Archivo Público General** nacería el Archivo Histórico Nacional. Como apunta Carmen Crespo, a diferencia del de Simancas, que había nacido para resolver una necesidad administrativa, de conservar los documentos probatorios de sus derechos del poder central, en el caso del nuevo archivo histórico nacional, el interés de su conservación sería meramente erudito, científicos y humanísticos. La causa de su nacimiento es bien conocida: la nacionalización y puesta en venta de los bienes amortizados de instituciones civiles y religiosas, por lo que se obligaba la entrega de sus archivos o su abandono, cuando no le servía administrativamente, por lo que la Academia de la Historia sensibilizada por el valor histórico que En la propia exposición de motivos ya se haría referencia a la necesidad de conservar los fondos documentales monásticos, que tantas veces habían sido destruidos y que constituían por sí solas un referente esencial para la construcción de la historia nacional: *Los Archivos monásticos de España fueron desde tiempo antiguos abundantes y preciosos depósitos donde se iban acumulando desde el principio de nuestra gloriosa reconquista los monumentos escritos de la religión, de la historia, de las artes y letras españolas. Siempre celosas las comunidades guardadoras de tan valioso tesoro, conservaron en lo posible incólume el sagrado depósito que desde los Reyes, Príncipes y altos dignatarios del Estado, hasta las clases inferiores de la sociedad por espacio de tantos siglos, les confieran. Más llegada la supresión de los institutos monásticos, y no mucho después la desamortización de sus bienes, en medio de la honda perturbación y del desconcierto inevitables en tan radicales medidas, y a*

*falta de una previsión y cuidado tan activos y vigilantes como hubieran sido de desear, perdióse una no pequeña parte de aquellas riquezas históricas, y fraccionada y dispersa la restante, fue a parar en manos de la Administración, que se había incautado de los bienes eclesiásticos. En tal situación estuvieron largo tiempo aquellos importantes documentos, no siempre custodiados con esmero debido, espuestos alguna vez a pérdida tan inminente como irreparable. En el artículo 1º del R.D. de 28 de marzo de 1866 que se declara archivo público general del Reino, bajo la denominación de Archivo Histórico Nacional, al reunido con los documentos procedentes de las suprimidas corporaciones monásticas por la Real Academia de la Historia en esta Corte, donde en adelante habrá de permanecer. En el artículo 4º se establecería los fondos del Archivo: Por mi ministro de Fomento, de acuerdo con el de Hacienda, se adoptarán las disposiciones necesarias a fin de que sean trasladados al Archivo Histórico Nacional todos los documentos procedentes de las suprimidas comunidades monásticas que existan en las administraciones de Hacienda Pública y no fuesen indispensables para acreditar derechos de propiedad. Constaría a su vez el papel que había representado la Real Academia de la Historia en este hecho, más cuando había solicitado su custodia, comprometiéndose a conservarlos y ordenarlos, petición que sería otorgado a raíz de la Real Orden de 26 de agosto de 1850, del Ministro de Hacienda, Bravo Murillo: La ilustrada cuanto persistente iniciativa de la Real Academia de la Historia logró evitar en gran parte semejante daño, que había impreso un negro borrón a la cultura de nuestra patria, obteniendo se le confiase por varios Reales disposiciones la conservación y custodia de los documentos históricos que pudieran recogerse de los Archivos de Hacienda, y la formación de índices con el fin de que, sin dejar de servir al Gobierno y sus dependencias, pudiesen utilizarlos en sus trabajos la mencionada Corporación y los aficionados a esta clase de estudios. No fueron inútiles los esfuerzos de la Academia, ni quedaron defraudadas las esperanzas que en su celo e ilustración el Gobierno y el público mandaran. De imponderable importancia histórica, literaria y artística, así por el número como por la calidad de los documentos que encierra, es a no dudar el Archivo que aquel Cuerpo literario ha ido por tales medios allegando en el local de su Biblioteca. Sin que nada dejen que desear el esmero y seguridad con que lo custodia, justo es asimismo reconocer que para su coordinación y arreglo ha trabajado cuanto en su mano estuvo, habiendo hecho redactar a su costa y bajo inteligente dirección los índices de los documentos de varios monasterios, algunos de los cuales ha dado y está para dar a la estampa. La aportación económica por parte del Estado llegaría con la promulgación de **la Real Orden del 29 de octubre de 1850**, autorizando a la Dirección general de Fincas para la aprobación de los gastos que ocasione la traslación de documentos históricos a la academia de la Historia, precisándose como en el archivo de la suprimida Administración general de Bienes Nacionales se han hallados algunos papeles que por su antigüedad e interés histórico deben conservarse en la Real Academia de la Historia; así como los de igual naturaleza que puedan existir en los archivos de las Administraciones de Fincas del Estado de las provincias, y en las bibliotecas de los suprimidos monasterios y conventos, por lo que se ha servido autorizar a esa Dirección para que apruebe los gastos que puedan originarse en la traslación y*

*colocación en la referida Academia de los documentos de que se trata desde los puntos en que se encuentren, con cargo al artículo único, capítulo XV, sección 9ª del presupuesto vigente. A raíz del Real decreto de 12 de junio de 1867 se vuelve a establecer el Archivo Histórico Nacional con el fin de recibir los fondos documentales históricos que se habían depositados en el Archivo General Central*<sup>2303</sup>.

### **1.6. La delimitación del espacio público en la configuración de la ciudad y su impacto en la protección del patrimonio monumental: la génesis del Patrimonio Urbano Monumental.**

#### **1.6.1. El debate urbanístico en torno a las transformaciones de la urbe tradicional y el nuevo modelo de ciudad burguesa, portadora de la idea de modernidad en la España de Isabel II: De la ciudad conventual a la ciudad liberal.**

Durante la etapa isabelina se configura definitivamente el triunfo del llamado espacio burgués, un modelo urbanístico que por su significación política e ideológica de exaltación de la clase de los propietarios sustituiría definitivamente lo que hasta este momento había significado el marco urbanístico del Antiguo Régimen, escenario de la exaltación de los poderes tradicionales de la Iglesia y la Nobleza. Se conquista una nueva realidad espacial donde desarrolle su vida el burgués protagonista social del momento, y al mismo tiempo se imponen los principios de modernidad que traducido en términos urbanísticos van a significar el triunfo de la higiene, ornato y seguridad fundamentada en una intervención administrativa de policía urbanística, que en cierta manera va a heredar del Antiguo Régimen. Sin embargo, las transformaciones que se van a ir produciendo en los tejidos urbanos heredados del pasado, genera un amplio debate entre historiadores, urbanistas e incluso en la opinión pública sobre conservación y transformación de la ciudad, que va ir produciendo una concienciación urbanística de interés histórico-artístico, en algunos sectores de manera muy enquistada con pretensiones tardorrománticas y en otro por una amplia transformación que defina un nuevo aspecto moderno a la ciudad. Uno de los debates más amplio en la estructuración de la ciudad isabelina será la configuración de la plaza pública, siendo la Plaza Mayor de Madrid su ejemplo más significativo, aunque a nivel local se irían realizando amplias plazas sobre antiguos terrenos conventuales, como fue el caso de Sevilla, con la plaza de San Pedro. El derribo de la muralla sería otro de las controversias en el ámbito conservacionista del Patrimonio Monumental Urbano, prevaleciendo en

---

<sup>2303</sup> DÁVILA, Alfonso *Los archivos del Estado. Que són y cómo se tratan*. Ediciones Trea, Gijón, 2010; ROMERO TALLAFIGO, Manuel *La historia de los Archivos. Archivo general de la nación*.



muchos casos el principio de salubridad e higiene sobre el interés histórico o artístico. En la configuración de la nueva ciudad liberal se fue estableciendo una serie de instituciones administrativas que intentarían salvaguardar la conservación del tejido urbano de interés histórico-artístico y al mismo tiempo respetar los nuevos principios de modernidad que se iban abriendo en este momento.

Como apunta Javier Gallego Roca *el concepto de patrimonio histórico aparece en el siglo XV y se concreta en el XIX, pero el concepto patrimonio urbano, es mas reciente y surge con el impacto de la revolución industrial, origen de situar en la historia el espacio urbano*<sup>2304</sup>. En opinión de Bassola *aunque no es hasta mediados del siglo XIX cuando se asiste a una verdadera protección jurídica y administrativa por la pérdida de los llamados centros históricos, en los años precedentes se comenzó a generar una verdadera concienciación patrimonial sobre los entornos de los monumentos históricos así como en mayor medida de amplias zonas urbanísticas. El debate entre el progreso industrial con la consiguiente transformación morfológica de la estructura urbanística y la pervivencia de la ciudad histórica va a ser un referente común durante todo el siglo. Probablemente fuera el derribo de la muralla el objeto más polémico en cuanto a esta controversia, ya que desde los decenios centrales del siglo se irán configurando un amplio sector conservacionista que al final no podría impedir la pérdida de esta peculiar simbología urbana que tradicionalmente había identificado la personalidad externa de una urbe. Sin duda alguna serían en un primer momento sectores intelectuales muy cercanos a la ideología romántica la que perfilaría la defensa de la ciudad histórica, para posteriormente ser defendido por las instituciones eruditas e intelectuales al considerar el espacio urbano tradicional unos valores históricos y sociales que lo identificaba con la propia identidad de la ciudad. Los primeros instrumentos de protección jurídica serían los Planes de Alineaciones como el aprobado en 1846, a los que habría que añadir la zonificación, los ensanches, etc. No podemos dejar atrás el impacto que produjo la desamortización en el tejido urbano y la consiguiente pérdida del patrimonio monumental, y es que durante la década de 1840 el signo de los tiempos era derribar conventos para construir mercados, que venían a ser algo así como el exponente del progreso popular urbanístico*<sup>2305</sup>. Como apunta García Colmenares *el impacto de la desamortización fue muy importante en las ciudades españolas, pero no fue el único elemento que influyó y, por tanto, no se puede decir que los profundos cambios que se produjeron en la morfología y estructura urbana sean solo consecuencia de la desamortización. Fue, sin duda, la forma que posibilitó el trasvase de una gran parte de la propiedad inmueble del clero a la burguesía y clases medias (...) La normativa urbanística de las ciudades del país se hizo por y para las clases sociales dominantes y su objetivo no fue otro que la*

<sup>2304</sup> GALLEGO ROCA, Javier *Renovación, restauración y recuperación arquitectónica y urbana: El caso de París*. Universidad de Granada, 2001, p.13. Sobre la noción de patrimonio urbano, CHOAY, Françoise *L'Invention du patrimoine urbain ¿Quel patrimoine aujourd'hui?* Revista Científica ICOMOS, Xunta de Galicia, 1993, pp.266-267.

<sup>2305</sup> BASSOLS COMA, M., 1973, pp.68-69.



*creación de una nueva ciudad, la ciudad burguesa*<sup>2306</sup>. Algunos autores como Estébanez Álvarez afirman tajantemente la dificultad de explicar la evolución urbana en los siglos XIX y XX sin relacionarla con los efectos de la desamortización, *ya que en algunas ciudades se movilizó tal cantidad de espacio intramuro que permitió la remodelación urbana interior absorbiendo el crecimiento demográfico(...)Y ello fue posible por la baja densidad de ocupación del suelo (...) además de amplios espacios interiores como huertas o patios, ampliados ahora con la desamortización de los conventos. La ciudad como espacio humanizado es un producto social y por ello su organización –la estructura urbana- es un reflejo, una plasmación espacial de la estructura social existente, de la formación social de cada periodo histórico (...) La normativa urbanística de las ciudades del país se hizo por y para las clases sociales dominantes y su objetivo no fue otro que la creación de una nueva ciudad, la ciudad burguesa*<sup>2307</sup>. Este modelo desmontaría ideológica y estructuralmente la llamada ciudad conventual, referente terminológico que identificaría el modelo urbanístico que tendría su origen en el siglo XVII, producida a través de las amplias donaciones que se fueron dando en la etapa contrarreformista por las clases sociales privilegiadas<sup>2308</sup>. En las Ordenanzas de Madrid escritas por Teodoro Ardemans, se aprecia la preeminencia que se daba a los edificios conventuales sobre los civiles particulares. Así, en su capítulo VII, titulado Como debe prevenir las casas, que se labran enfrente o al lado de Monasterios, para que no sean registrados se establecía: *Son los conventos de Religiosas y Religiosos dignos de que se atiendan, por la reverencia que ellos mismos ocasionan a todos los fieles; y así, cualquiera que labre al lado de ellos tendrá presente no puede tener ventana, ni guardilla, que desde ella registre la clausura, y podrá valerse de otras luces*. Sobre la desamortización urbana. Uno de los primeros trabajos sobre la cuestión fue el de Porres Martín-Cleto, concretamente sobre la ciudad de Toledo, en la que estudia como muchos de los antiguos conventos serían comprados por los vecinos de Madrid. En el caso de Madrid, los estudios de Simón Segura quien afirma que muchos monasterios fueron vendidos y demolidos y sus solares fueron nuevamente edificadas o se abrieron calles y mercados, del que nacería la ciudad liberal madrileña<sup>2309</sup>.

Las transformaciones morfológicas que van a ir efectuándose en las ciudades españolas en la etapa isabelina iría generando un verdadero debate en el seno de la intelectualidad española, entre aquellos que eran partidarios de la

---

<sup>2306</sup> GARCIA COLMENARES, Pablo, “Transformaciones urbanísticas e industriales en RUEDA, Germán La desamortización en la Península Ibérica”, *Ayer*, 9, 1993,

<sup>2307</sup> ESTEBANEZ ALVAREZ, J. *Las ciudades, morfología y estructura*, Madrid, 1989.

<sup>2308</sup> El término ciudad conventual hace referencia CHUECA GOITIA, F. Breve historia del urbanismo, Alianza Editorial, 1985, Madrid, p.15 y CERVERA VERAM L. “La época de los Austrias”, en *Resumen histórico del urbanismo en España*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1987.

<sup>2309</sup> En el ámbito de la ciudad de Madrid, SIMON SEGURA, Francisco, *Contribución al estudio de la desamortización en España: la desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid*. Madrid, 1969; RUIZ PALOMEQUE, E. Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante el siglo XIX y XX. Madrid, 1976, y Ordenación y realidad urbana en el casco antiguo madrileño en el siglo XIX, Urbanismo e Historia de España. Madrid, 1978.

modernización urbana y aquellos que todavía con ciertos matices románticos veían en ellas una verdadera destrucción de la identidad original, debate que se había iniciado en años anteriores en la Francia de Napoleón III<sup>2310</sup>. El mallorquín José María Quadrado en sus artículos publicados en la revista Seminario Pintoresco Español con el título *Del Vandalismo en arquitectura* criticaría la destrucción que estaban viviendo las estructuras urbanas de las ciudades españolas. Pone como ejemplo a Palma de Mallorca, calificando la intervención de *irrupción del individualismo, de la personalidad egoísta, del materialismo disolvente*. Se denunciaría en sus escritos como la modernización de la ciudad, a la que contribuyera la piqueta demoledora y el trazado rectilíneo de los nuevos barrios, acarrearía de modo inevitable la muerte de su originalidad, su carácter individual, que terminaría configurando ciudades anodinas, uniformes e indiferenciables entre sí. La defensa de la urbe tradicional, con ciertos matices románticos lo encontramos también en el texto de Pedro Antonio de Alarcón en su obra *De Madrid a Santander: Pero ¡ay! Por dondequiera que voy veo caer a pedazos las más antiguas ciudades... El prurito de derribar para ensanchar o reedificar, que se ha apoderado de Madrid trasciende ya a las más apartadas y sedentarias villas...- Mucho ganará en ello no la higiene, sino el ornato público, pero mucho perderán el arte, la historia y la poesía(...)* –Dígoles, porque, en medio de aquellos nobles caserones de Palencia, están ya levantado algunas jaulas de cinco pisos, para diez familias y al estilo francés, que ponen espanto a los extravagantes como yo, enamorados de lo viejo, tradicional y castizo, y sobre todo de la libertad y de la holgura. En contraposición con estas reflexiones se dieron una serie de voces a favor de los procesos urbanos que se estaban desarrollando en estos años como fue el caso de la literata George Sand que en 1841 publicaría un alegato por la modernidad en su libro *Un hiver á Majorque: Los principios de una nueva vida están ocultos en las cenizas de las ruinas. El día en que cayeron estos conventos hubo en la atmósfera política de España algo análogo a esa necesidad de renovación que experimenta la naturaleza en sus fecundas convulsiones (...)*Llore, pues, quien quiera sobre las ruinas. Casi todos esos monumentos cuya caída deploramos son calabozos donde han languidecido durante siglos el alma o el cuerpo de la humanidad.

La presión de la opinión pública también desempeñó un importante papel en la salvaguarda de algunos monumentos históricos, como fue el caso del arco de las Orejas, una interesante muestra de arte islámico que en 1857 iba a ser derribado por el Ayuntamiento de Granada al impedir la alineación que había sido propuesto por los arquitectos municipales. En algunos periódicos de Madrid y en el titulado *Dauro de Granada* salto la noticia de la intención de derribo del Consistorio granadino, para regularizar los costados de la plaza de Bibarrambla, por lo que suscitó sendas comunicaciones de la Academia de

<sup>2310</sup> Autores como Teófilo Gautier, Merimeé o Victor Hugo en principio no se opondrían abiertamente a las modificaciones que se estaban realizando en las antiguas urbes medievales, y en ningún momento la opinión pública tuvo conciencia de que se estaba destruyendo el patrimonio.

Bellas Artes de Granada y la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia, solicitando al ayuntamiento una explicación. Rápidamente el arquitecto municipal Juan Puignare, como portavoz del municipio desmentiría la noticia, en unos términos que resume en cierta manera el espíritu proteccionista de algunas instituciones municipales del momento: *Ni antes ni después de la confección del proyecto de alineación que nos ocupa se ha pensado en destruir ni mutilar en manera alguna el dicho monumento. Si hoy se encuentra en un rincón de la plaza, confundido y oculto por otras construcciones mezquinas, después quedará en una de las calles laterales marcadas en el mismo proyecto de alineación. La época en que otra puerta morisca fue destruida por orden de un Jefe Político, pasó con la revolución. Hoy estos monumentos se respetan por lo que valen y los Arquitectos granadinos, autores del proyecto de la plaza de Bibarrambla no necesita que la prensa de Madrid los invite a respetarlo.* En la Memoria Administrativa del Ayuntamiento de los años 1857 y 1858 constaría que *con arreglo al arte y conveniencia, conservando, aunque fuera de la plaza, por no permitir otra cosa la regularidad de su extraña configuración, el histórico monumento conocido con el nombre de arco de las Orejas, por más que algunas personas hayan querido suponer en la Corporación la torpe idea de destruirlo.* Sin embargo, no podemos hacer una visión superficial de las transformaciones urbanísticas, considerando toda intervención como destrucción patrimonial sin más. Ya que en muchas de las modificaciones estructurales llevadas a cabo en estos años por los ayuntamientos isabelina tenían como objetivo primordial el embellecimiento de las plazas y calles que iban gestándose desde la etapa de la desamortización, y que en muchas ocasiones se topaban con el problema del entramado de callejuelas casi derruidas de herencia medieval y de un mísero caserío que en ningún momento se hubiera podido recuperar, no solamente por una aparente falta de conciencia patrimonial sino también por las propias posibilidades económicas. En palabra de Quirós *la renovación del caserío tiene, pues, un carácter generalizado y, hecha a costa del caserío preindustrial, otorgará progresivamente a las ciudades un nuevo aspecto, reflejo de una nueva realidad económica, en virtud de la cual, en los cascos históricos, o al menos en el centro de los mismos, no quedan del trazado sino la traza viaria (con las alteraciones que la alineación de fachadas introduce) y edificios históricos residuales, mantenidos bien por su monumentalidad, por su uso público, o por utilidad, para adaptarlos a usos privados(...)*<sup>2311</sup>. Incluso algunos historiadores locales, como fue en el caso de Granada, en el artículo en 1840 por Juan Puignare en la revista *La Alhambra*, en un artículo titulado *Mejoras locales*, verían positivo las transformaciones morfológicas que necesitaba la ciudad, debido a la imagen de podredumbre que daba: *Esta ciudad, tan favorecida presenta en su mayor parte un aspecto monstruoso y desagradable, respecto a su decoración y distribución; pues si prescindimos de algunos edificios que la religiosidad y grandeza de sus antepasados elevaron al culto, a las ciencias y a la ostentación de sus monarcas, por lo demás no se ve en ella ni plazas decoradas, ni mercados públicos convenientemente establecidos, ni cárceles*

---

<sup>2311</sup> QUIROS, F. *Las ciudades españolas a mediados del siglo XIX*, Sevilla, Trea, 2009.

*arregladas, ni fuentes, ni calles derechas y regulares; presentándose en su lugar a vista, estrechas comunicaciones en forma de laberintos, en donde la atmósfera se renueva con dificultad, el forastero se pierde, se oculta el criminal y la mujer pública se alberga. Su decoración es pobre y de mal gusto, adoleciendo de ese espíritu mezquino para las obras que han acompañado a los siglos XVII y XVIII*<sup>2312</sup>.

### **1.6.2. Una incipiente administración de la tutela pública del Patrimonio Monumental Urbanístico.**

No cabe duda que el debate urbanístico va a ir cuajando un verdadero debate en torno a la protección jurídica del llamado Patrimonio Monumental Urbanístico, subyaciendo conflictos competenciales entre el propio Estado y las Corporaciones Municipales y los límites de los intereses particulares. La configuración de la llamada policía urbanística va a tener su proyección en el ámbito de tutela monumental, con la consiguiente creación de una institucionalización administrativa dando prioridad a las Juntas Consultivas de Obras Públicas y a la Real Academia de Bellas Artes en los programas urbanísticos de ensanches, alineaciones y derribos que se irían sucediendo durante esta etapa con el objetivo de una supuesta modernidad urbanística, por lo que el conflicto entre el principio del ornato e higiene estaría servido. Se iría construyendo un derecho urbanístico de intervención estatal sobre los intereses municipales y particulares que tendrían aunque muy lentamente una proyección en el sistema normativo del Patrimonio Monumental Urbanístico. Sería en el ámbito de los bienes inmuebles más que en los conjuntos urbanísticos donde asistimos a un desarrollo normativo tutelar

#### **1.6.2.1. Las Corporaciones Municipales: las Comisiones de Ornato y los Arquitectos Municipales.**

Sería el papel de los ayuntamientos los que se vieron fortalecidos en las nuevas políticas urbanísticas. Con los dos Reales Decretos promulgados por Isabel II, con fecha de 15 de octubre y 8 de diciembre de 1836, se volverían a dar potestad política a las competencias municipales que habían sido diseñadas en Cádiz en 1812. Para ello se crearían Comisiones que se encargarían de las obligaciones asumidas por los Consistorios, siendo una de ellas la de Ornato Público, que se encargaría de gestionar todo tipo de actuaciones urbanísticas y edificatorias. La Comisión de Ornato lo proponía el Pleno del Ayuntamiento, que adoptaba los acuerdos de aprobación inicial, y la autoridad superior administrativa los aprobaban definitivamente. Para ello se aprobaba un Reglamento de Ornato Público, que en muchos casos contenía el respeto de los edificios históricos y artísticos, aunque sin tomar en consideración ni el primitivo trazado de las calles, ni de la ciudad en su conjunto, sino que al contrario se trataba de modificar el entramado público para adecuarlas a las nuevas exigencias de la vida contemporánea. En la Memoria del Proyecto de la Calle Elvira de Granada redactado por el arquitecto de la ciudad José María

<sup>2312</sup> PUGNAIE, Juan *Mejoras Locales en La Alhambra*, 1840, p.404.

Mellado ya planteaba la conservación de los edificios históricos pero al mismo tiempo el replanteamiento del viario: *La falta de estudio en la formación de las calles en las antiguas poblaciones hacen que éstas sean tortuosas y defectuosas, en términos de ser imposible regularizar muchas de ellas debidamente. Esto mismo le sucede a la calle Elvira, que siendo excesivamente larga y conteniendo muchos edificios importantes y públicos colocados al acaso y sin estudio alguno, hacen que hoy sea imposible formar una calle cual correspondería a la situación y tránsito de ésta*, ya que respetaría íntegramente los Hospitales, el convento del Ángel, la Casa-Cuna y la iglesia de San Andrés. Los reglamentos de ornato y los bandos de buen gobierno, junto con los proyectos de alineaciones, fueron los instrumentos legales con los que la autoridad municipal pretendía el mantenimiento del ornato y decoro de la escena urbana. Un ejemplo significativo podemos encontrarlo en el de Granada de 1847. En 1844 el Arquitecto Mayor de la Ciudad, Salvador Amador, solicitaba la elaboración de un reglamento para hacer frente al abandono de las edificaciones, en bien del decoro urbano, por lo que se estaba intentando que la Administración diseñara frente a las pretensiones anárquicas de los particulares el modelo de ciudad que debía de formularse: Las reformas de población y la mejora progresiva de sus edificios han llegado a ser una mentira, hasta en las calles más públicas se construyen por cualquier albañil las casas más ruines y peor decoradas que se pueden imaginar (...). El Objetivo de esta Exposición era contribuir al ornato público, por lo que instaba a la redacción de un Reglamento donde se fijara los derechos por todas las licencias de obras expedidas, aunque ello implicara la oposición de los propietarios. El 21 de abril de 1847 sería aprobado por el Cabildo Municipal de Granada el Reglamento de Ornato Público, que a lo largo de 27 artículos pondría las bases del modelo de planificación urbana. En su artículo I figuraba que no se construiría edificio ni obra de ninguna clase sin licencia de la Autoridad Municipal que se concedería gratuitamente. Entre las prohibiciones que se impusieron a los particulares constaría *el reparar y componer cosa alguna en lo que de todo ello existe, como contrario a la buena decoración y aspecto público* (art.7)<sup>2313</sup>.

Ricardo Anguita resume la actuación de la Administración española en este momento en los siguientes términos: *Nacido el Estado burgués, se va desarrollando un nuevo instrumento administrativo: la Policía Urbana, que en lo esencial, su significado es idéntico al de épocas pasadas, si bien ahora adquiere nuevos matices como resultado de su adaptación a un orden político y social diferente. Por una parte, desarrolla y se convierte en garante de los principios del nuevo sistema, como son el orden público, la seguridad individual o la protección de la propiedad urbana; por otro, la Policía debe convertirse en defensor de los intereses públicos ante la gran amplitud alcanzada por los derechos del individuo, restringiendo en lo posible su ejercicio. Sin embargo, esta limitación no debe ser*

---

<sup>2313</sup> ISAC, Angel "La ciudad de Granada y el palacete de los mártires a mediados del siglo XIX" *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, N°XXIV, 1993, Departamento de Historia del Arte, pp.218-219.



*interpretada como un hecho contradictorio con el principio burgués de libertad sino como el establecimiento de unas reglas de juego para el correcto funcionamiento del sistema y el logro del llamado bien público. El campo de actuación de la Policía urbana es amplio, del orden público al ornato de las poblaciones, pasando por la salubridad y comodidad de éstas. Todas ellas quedaban reguladas en el articulado desarrollado en un documento normativo que arrastraba una larga existencia dentro del municipio español, las Ordenanzas. Redactadas por los Ayuntamientos, se erigirán como código regulador global de la actividad en sus múltiples facetas, fijando las relaciones permitidas, las normas que debían ser respetadas y las actuaciones que quedaban prohibidas dentro de la ciudad, basándose en un sistema de limitaciones de componente preventiva, coercitiva y penalizadora en su transgresión<sup>2314</sup>. La Comisión de Ornato, que sería la encargada de regular la intervención sobre la ciudad, tanto en la transformación de la trama urbana como en la concesión de las licencias a los particulares. La existencia de un cierto control de la edificación abre el camino de una intervención administrativa clara sobre los particulares, especialmente cuando se empieza a elaborar un procedimiento administrativo por el cual se deberá de hacer una petición o licencia municipal sobre las formas de ejecutar las obras y la composición arquitectónica de los edificios, por lo que desde este momento, el carácter absoluto de la propiedad quedaría relativizado, teniendo que ser presentado como requisito imprescindible el diseño de la fachada. Las composiciones arquitectónicas serían reguladas por las Ordenanzas Municipales como fue el caso del de Barcelona, donde se confía al propietario la más completa libertad arquitectónica para su edificación, siempre que su diseño fuera acorde con el arte arquitectónico: Todo propietario es árbitro de adoptar para la fachada de su edificio el tipo de arquitectura que más le plazca, mientras el proyecto no sea un conjunto caprichoso sin relación ni carácter. No se consentirán adornos extravagantes en las fachadas, ni lo que no estén en armonía con el destino y carácter del edificio.*

Las potestades asumidas por las Corporaciones Municipales en torno a policía urbana van a ser motivos de controversia con los intereses de los particulares, e incluso conflictos con las propias Reales Academias daría lugar a la promulgación de la **Real orden de 13 de septiembre de 1859** disponiendo que las medidas adoptadas por los Ayuntamientos en materia de policía urbana, se eleven al Gobierno de S.M. para la resolución oportuna. En la lectura de la disposición aparece reflejado las quejas de los particulares, al señalar como *confrecuencia los particulares que se consideran agraviados por las medidas que en materia de policía urbana adoptan los ayuntamientos en uso de sus atribuciones, oponen a ellas el juicio de de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando y de las Academias de provincia, apelando a su testimonio para dar apoyo a sus quejas; al mismo tiempo que enterada también de que los Ayuntamientos, cediendo ante el respeto que sin duda alguna merece la opinión de las Academias, modifican sus acuerdos*

<sup>2314</sup> ANGUITA CANTERO, Ricardo “Las ordenanzas municipales como instrumento de control de la transformación urbana en la ciudad del siglo XIX” *Cuadernos de Arte*, N° XXIII, Universidad de Granada, 1992, pp.466-467.



*quebrantando el orden de los procedimientos administrativos.* De esta manera se instaba a que el Gobierno de acuerdo *con lo dispuesto en el Real decreto de 17 del pasado*, se le atribuiría la potestad cuando se manifestase *oposición o queja de los acuerdos de los Ayuntamientos en todo lo que se refiera a la formación de nuevas calles, pasadizos o plazas, alineación de las antiguas, y otras cualesquiera medidas de policía urbana*, pudiera elevarse con su informe los expedientes por conducto del Gobernador civil de la provincia, para que oyendo al Consejo de Estado, a la Real Academia de San Fernando, y a la Junta consultiva de policía urbana y edificios públicos, según los casos, propusiera *lo que tenga por conveniente a la soberana resolución.* De esta manera se reforzaba la posición del Gobierno sobre aquellos acuerdos administrativos que podían haber adoptado las Corporaciones Municipales sobre policía urbana.

#### **1.6.2.2. Un nuevo organismo del Patrimonio Urbanístico: La Junta Consultiva de Policía Urbana.**

El 25 de septiembre de 1857 se vuelve a constituir la Junta Consultiva de Policía Urbana siendo Ministro de Gobernación Claudio Moyano<sup>2315</sup>, fundamentada *en la necesidad de impulsar las mejoras de la Policía urbana en su más lata acepción, solicitada siempre en favorecer cuanto contribuya al bienestar de los pueblos y al esplendor nacional.* Como apuntaba la propia Exposición de Motivos la anterior Junta, creada por el Real decreto de 4 de agosto de 1852, había sido suprimida unos días después, con el Real decreto de 9 de agosto de 1852, *sin que su notable falta en la máquina administrativa pudiese llenarse cumplidamente por el celo e ilustración artística de la Real Academia de San Fernando, institución cuyas importantes atribuciones no son, sin embargo, de la misma índole que la de la Junta suprimida, ni contiene todos los indicados elementos*, por lo que se consideraba la necesidad de *restablecer aquel cuerpo consultivo, que tan señalados servicios prestó en el breve periodo de su existencia.* La nueva Junta nacería bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación una Junta consultiva de Policía urbana (art.1), cuya organigrama estaría formado por el Ministro de la Gobernación como Presidente; Una persona de categoría por los cargos públicos que haya desempeñado, Vicepresidente; Doce Vocales, a saber: El Director de la Escuela de Arquitectura; Un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Tres Arquitectos; Un profesor de Medicina; Un profesor de Química; El Alcalde, y un individuo del ayuntamiento de Madrid nombrado por el mismo; un Jurisconsulto; Dos personas inteligentes en Bellas Artes y Administración. Será Secretario sin voto un oficial de Dirección del Ministerio de la Gobernación (art.2). Esta Junta tendrá por objeto dar su dictamen sobre los proyectos y la ejecución de los edificios que se construyan o reformen por el Ministerio de la

---

<sup>2315</sup> GOMEZ MENDOZA, Josefina, “Urbanismo e ingeniería en el siglo XIX. Reforma e interior de las ciudades y movilidad”. Discurso de 21 de marzo de 2006 se recepción en la Real Academia de Ingeniería, Madrid, MMVI.

Gobernación, o que requiera su aprobación, bien fuera costeadado con fondos del Estado, bien con los provinciales o municipales, examinar sus planos, presupuestos, pliegos de condiciones y subastas; informar sobre la alineación y anchura de las calles y plazas, altura de las casas y reformas de las poblaciones; proponer los acuerdos que convenga tomar en las cuestiones relativas a Arquitectura legal, y, finalmente, entender en los asuntos concernientes a la policía urbana, manifestando su opinión acerca de los diferentes servicios que abraza, como asimismo de los proyectos que se presenten para mejorarla, ayudando al Gobierno en cuanto contribuya al bienestar, limpieza, salubridad y ornato de los pueblos (art.5). Con la promulgación del Real decreto de 25 de septiembre de 1857 sería nombrando Vicepresidente de la Junta Consultiva de Policía Urbana a Don Pedro Gómez de la Serna y Vocales al Alcalde Corregidor y un individuo del Ayuntamiento de Madrid elegido por la Corporación Municipal.

Dos años después, mediante el **Real decreto de 17 de agosto de 1859** la Junta sería denominada Junta Consultiva de Policía Urbana y Edificios Públicos, ensanchándose sus trabajos a las construcciones civiles, reforzando la presencia de letrados y de técnicos, entre los que se encontraban la presencia de letrados y seis arquitectos o académicos de San Fernando. La Junta reforzaba sus facultades al tener que ser oída en todo lo relativo a edificios públicos, los planes totales y parciales de las poblaciones, los reglamentos y todas las mejoras y obras que por su naturaleza no fueran de la incumbencia del cuerpo de ingenieros y del Ministerio de Fomento. De este modo, la Junta informaría de los planes de ensanche de Madrid, de Barcelona, de Valencia, e incluso el plan de reforma interior de Madrid redactado por Cerdá. La Junta continuaría dependiendo en su personal y material del Ministerio de la Gobernación (art.2º), estando compuesta de un Presidente, doce vocales y un secretario (art.3º), incluyéndose entre los seis Vocales Arquitectos o ingenieros, habrá dos siempre con el carácter de Inspectores generales de Policía urbana y edificios públicos, de los cuales podrá disponer el Gobierno para emplearlos en las comisiones que reclame el servicio (art.7º). La Junta sería oída especialmente sobre los estudios, proyectos y presupuestos de los edificios (...) sobre las cuestiones que produzcan la formación y alineación de calles y plazas, según los planos previamente aprobados (art.16). Nuevamente se reservaba un papel significativo a la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, ya que continuaría siendo oída acerca de la decoración de los edificios públicos, y de la importancia artística de los que convenga conservar o reparar, ya fueran de propiedad del Estado, ya pertenecieran a las provincias o Ayuntamientos (art.18). Con la promulgación del Real decreto de 22 de marzo de 1865 suprimiendo la Junta de Policía urbana y edificios públicos. En la Exposición de Motivos quedaría recogido su causa, apuntando que al ser un Cuerpo consultivo encargado *de dar opiniones en asuntos en que, con la propia competencia, pueden darlas otras corporaciones hoy existentes y que son especiales cada una en su*

*respectivo ramo (...) de modo que ampliando en parte la Sección de construcciones civiles en establecida en este Ministerio para que los negocios puedan instruirse con brevedad, y consultando donde fuere preciso al Consejo de Estado, a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, a la Academia de San Fernando o al Consejo de Sanidad, se tendrán todas las garantías posibles de acierto, sin perjudicar el buen servicio y consiguiendo una economía no despreciable.*

#### **1.6.2.3. Las nuevas atribuciones de los Arquitectos Municipales y su impronta en el Patrimonio Monumental Urbanístico: El Real decreto de 1º de diciembre de 1858.**

El cuerpo facultativo de Arquitectos Municipales también sufriría una interesante reforma, a raíz de la promulgación del **Real decreto de 1º de diciembre de 1858** fijando el número y las atribuciones de los arquitectos de provincia, fundamentado en *lanecesidad generalmente sentida de que la dirección de las obras públicas encargadas a las provincias y a los Ayuntamientos se halle confiada a profesores idóneos, y de que la Autoridad local tenga a su inmediación agentes facultativos de quienes valerse y asesorarse para la más acertada resolución de las cuestiones que diariamente surgen en materia de policía urbana* (Exposición de Motivos), por lo que se dispondría que habría en cada provincia un Arquitecto con el cual debía asesorar el Gobernador siempre que hubiera de tomar disposiciones acerca de la construcción de edificios del Estado, de la provincia y de los Ayuntamientos, así como en todos los asuntos de policía urbana (art.1º), al mismo tiempo que dirigirían todas las obras de su competencia que les fuese encargado por los gobernadores de las provincias, cualquiera que fuera su naturaleza (art.2). Entre las competencias que se le atribuirían a los arquitectos de provincias estarían hacer los planos, proyectos, presupuestos y pliegos de condiciones de las obras del Estado, provinciales y municipales; vigilar por la observancia de las reglas que se refiriesen a su profesión proponiendo a los Gobernadores lo que en este sentido estimen, y especialmente las mejoras que creyeran conveniente a los edificios públicos y a la salubridad, recreo y ornato de las poblaciones (art.4). Una novedad competencial sobre el Patrimonio Monumental Urbano lo constituye la inclusión de los Arquitectos provinciales como los de distrito en las comisiones de monumentos artísticos e históricos de las provincias en que sirvan como individuos natos (art.9º). La disposición sería completada con **el Real decreto de 14 de marzo de 1860**, aprobando el reglamento del de 1º de diciembre de 1858, sobre organización del servicio público de arquitectos provinciales.

#### **1.6.2.4. La pervivencia del papel tutelar de la Real Academia de San Fernando y la Real Academia de la Historia en el ámbito del Patrimonio Monumental Urbanístico.**

El papel que va a desempeñar la Real Academia de San Fernando y la Real Academia de la Historia en la política urbanística va a seguir acrecentándose en la medida de verdadero inspector de la tutela del Patrimonio

Monumental Urbano, bien en los informes de la planificación urbana de ensanches y alineaciones como en los derribos de aquellos bienes inmuebles que se le otorgaría un interés histórico y artístico. Como referente a esto último cabe mencionar la **Minuta de Oficio de 26 de mayo de 1862** de la Real Academia de la Historia en la que se expone que, enterada del derribo de la Puerta de Toledo en Talavera de la Reina, solicita que se prevenga a todos los Ayuntamientos que no acuerden el derribo de ningún monumento antiguo sin consultar a las Reales Academias de Nobles Artes de San Fernando y de la Historia, fundamentándose en la Ley Título XX Libro VIII de la Novísima Recopilación, por la que se le había encomendado la inspección de los monumentos históricos del reino, al mismo tiempo se designaba a los Justicias de todos los pueblos que tomasen *las providencias convenientes para que nadie destruya ni maltrate los objetos de dicha clase descubiertos o que se descubran, y que practiquen lo mismo en los edificios antiguos que existen en los pueblos y despoblados, sin permitir que se derriben ni toquen sus materiales para ningún fin, conocimiento a la Academia en caso de amenazas próxima ruina*. En la Minuta de Oficio se precisaba como *había llegado a saber este Cuerpo literario que, prescindiendo de disposiciones tan claras y terminantes, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina a efecto el derribo de un antiguo torreón y arco llamado de Toledo, que había en dicha villa, por lo que en caso de repetirse hechos de esta naturaleza desaparecerían en poco tiempo los monumentos históricos y artísticos que aún quedan son el mayor lustre y realce de la nación, por lo que se solicitaba al Ministerio que en nombre de la Academia, se sirviera prevenir a todos los Ayuntamientos que no acuerden el derribo de ningún monumento antiguo, sin consultar a las Reales Academias de Nobles Artes de San Fernando y de la Historia, remitiendo a las mismas el expediente informado por el Arquitecto Provincial*.

### **1.6.3. Las transformaciones morfológicas y su impacto en el Patrimonio Monumental Urbanístico.**

En el ámbito español se afirma que debido a la escasa industrialización de los primeros decenios del siglo XIX se determinó un peculiar desarrollo urbanístico hispano. Siguiendo al historiador Francisco Calvo Serralleren *nuestro país no existieron esas famosas ciudades-carbón de la Europa industrial, y el crecimiento demográfico que se produce no implica en la mayoría de los casos fuertes desplazamientos migratorios del campo a la ciudad, salvo en algunos de los casos, que no pueden ser regla general para todo el país. Nuestras ciudades de la primera mitad del siglo XIX no conocieron esta típica conjunción de fábricas y arrabales proletarios y, a excepción de Barcelona, no la conocerán en algunos casos, hasta finales de siglo, y en otros hasta hace relativamente poco. De ahí que se explique que los primeros impulsos de reforma y extensión urbana estén motivados más por la exigencia de un mayor bienestar y comodidad de las nuevas clases sociales –la burguesía– que por los problemas de alojamiento del proletario industrial*<sup>2316</sup>. Las

<sup>2316</sup> CALVO SERRALLER, Francisco, *La imagen romántica de España: arte y arquitectura del siglo XIX*, Madrid, Alianza Editorial, 1994.

reformas internas en la España isabelina se producirían en tres ámbitos fundamentales: 1º) el abastecimiento, saneamiento e higiene de los núcleos urbanos; 2º) la construcción de viviendas y barrios y 3º) la apertura de nuevas calles y la ampliación de las antiguas. Sin embargo, en comparación con el resto de los países europeos, existieron unas ciertas peculiaridades que le dieron un carácter singular a este incipiente derecho urbanístico español, ya que como apunta Martín Bassols si *en la mayoría de los países, los problemas de orden higiénico y sanitario serán los motores fundamentales de las primeras disposiciones urbanísticas y consecuentemente las primeras actuaciones serán fundamentalmente de saneamiento, reforma interior y eliminación de barrios insalubres a los efectos de mejorar las condiciones de habitabilidad de las clases obreras, por el contrario en nuestro país el naciente Urbanismo tendrá un carácter eminente expansionista*<sup>2317</sup>.

#### **1.6.3.1. Las alineaciones y los ensanches. Los primeros instrumentos del derecho urbanístico y su impronta en el Patrimonio Monumental Urbano.**

La política urbanística que van a adoptar los gobiernos liberales de la España isabelina estará soportada por una concepción modernizadora que quedará traducida en la introducción de los ensanches y las alineaciones, dirigía principalmente a principios higienistas y se concretaban en el derribo de los barrios antiguos y la apertura de nuevas calles. Al mismo tiempo que se iba introduciendo una renovación del caserío que iría sustituyendo en sus caracteres estéticos y morfológicos a los que habían pervivido de etapas anteriores<sup>2318</sup>. La renovación del caserío llevaría probablemente a una pérdida de la antigua arquitectura doméstica, incorporándose los nuevos gustos burgueses. Así los antiguos edificios de una o dos plantas serían sustituidas por otros de cuatro o cinco, las llamadas casas de pisos, cuya planta baja, sería utilizado como tiendas. De ahí que en unos pocos años algunas ciudades habían cambiado su peculiar fisonomía, lo que el mismo Madoz terminaría afirmando que algunas ciudades *parecerá enteramente nueva*. En los textos de Benito Pérez Galdós podemos apreciar en sus descripciones de Madrid los nuevos aspectos renovadores tanto del caserío como de la propia disposición vial. Se establecerá una disyuntiva entre el ensanche y la reforma interior, optándose en un primer momento por esta última, probablemente por el retraso de la industrialización en España, como ocurrió en el caso de Madrid, debido a la postura del entonces concejal, el literato Mesoneros Romero, planteado en su : *Déjese conocer de todo lo expuesto que en nuestra opinión lo que ahora conviene a Madrid, no es tanto la extensión de sus límites, como la regulación y aprovechamiento*

---

<sup>2317</sup> BASSOLS COMA, Martín *Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956)*. Madrid, 1973 p.61.

<sup>2318</sup> BASSOLS COMA, Martín, “Los inicios del derecho urbanístico en el periodo del liberalismo moderado y el sexenio revolucionario (1846-1876): el Ensanche de la ciudad como modelo urbanístico y sistema jurídico. *Ciudad y Territorio. Estudios territoriales*, XXVIII, nº 107-108, N° especial: Siglo y medio de urbanismo en España, pp.19-52.



*del espacio que hoy ocupa*, para lo que propuso la división de la ciudad en cuatro partes, en las que se emprendería la reforma de calles, edificios y comunicaciones. Al mismo tiempo proyectaría una nueva tipología de edificios públicos, que daría lugar a la llamada arquitectura isabelina: mercados cerrados, mataderos municipales, teatros, etc.

La práctica urbana de los ensanches tendría su ejemplo pionero en Barcelona, que fue planteado por Idelfonso Cerdá (1816-1876) en su Plan de Expansión de 1859, que se convirtió en un verdadero precedente del urbanismo europeo<sup>2319</sup>. Mediante la utilización de la cuadrícula expansiva se fue demarcando la nueva estructura urbana, no cargada de polémicas, especialmente de ámbitos políticos y administrativos, entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Barcelona<sup>2320</sup>. En su *Teoría General de la Urbanización*, admirable síntesis de conocimientos técnicos del momento, se planteaba todos los puntos vitales del nuevo urbanismo moderno: *La organización espacial viene dada por la compatibilización de las exigencias de la circulación, con las de la higiene y con el proceso del desarrollo de la edificación*. En Madrid también se proyectó un ensanche ya en 1857, encargado por el mismo Gobierno al arquitecto e ingeniero Carlos M<sup>a</sup> de Castro, tras la polémica entre los partidarios de la reforma interna y la proyección exterior. Con el Decreto de 1860 se aprobaría el plan de Castro, aunque yuxtaponía al casco antiguo, una amplia superficie envolvente desde el noroeste al sureste, en base a una retícula ortogonal a bases de manzanas de distintas dimensiones<sup>2321</sup>. En otras ciudades españolas comenzaron a planificarse otros ensanches que no llegaron nunca a ponerse en marcha, como fue en el caso de Valencia, que se planteó un proyecto en 1858, pero que no se puso en práctica o en Bilbao, que no se puso en marcha el interesante proyecto de Antonio Cortázar, que había aprobado el Ministerio. A ellos se unirían la elaboración y aprobación de otros proyectos en los años finales de la España Isabelina, como el de Vitoria, de 1865, y el de Gijón en 1867<sup>2322</sup>. Un caso excepcional lo representó la ciudad de

<sup>2319</sup> No obstante, cabe mencionar que ya en el siglo XVIII en el urbanismo español encontramos algunos ejemplos de ensanches, y al principio del XIX, como fueron los casos de la Nueva Población del Puerto de Tarragona, iniciada en 1815, y la Nueva Población de Vigo, en 1837. cfr. DE TERAN, Fernando, 1999, p.56.

<sup>2320</sup> Paradójicamente desde el ámbito local hubo un amplio rechazo al proyecto de Cerdá, apostando por el de proyecto del arquitecto Rovira i Trias, quien disponía la expansión de la ciudad en forma radial y concéntrica respecto a ella misma, gravitando funcionalmente sobre el núcleo histórico. Sobre Cerdá existe una amplia bibliografía destacando VV.AA. *Cerdá y Barcelona* (Vol.1) y *Cerdá y Madrid* (Vol.2) Madrid, 1991.

<sup>2321</sup> Entre las medidas que aparecen en el Plan Castro cabrían destacar el señalamiento de un nuevo recinto limitado por un paseo de ronda, el trazado en cuadrículas, la previsión de espacios verdes importantes, una zonificación, por lo que se preveía algunos barrios obreros, como el de Chamberí, los de clases medias, en el de Salamanca y el emplazamiento de edificios públicos, cuarteles, hospitales, etc. Cfr. CALVO SERRALLER, 1995, p.207. El proyecto de Castro se iría deteriorando debido a que la gestión municipal chocaría con las ambiciones especulativas privadas.

<sup>2322</sup> DE TERÁN, Fernando *Historia del urbanismo en España* Tomo III. Madrid, 1999. pp.62-63.



San Sebastián, siguiéndose el proyecto de Antonio Cortázar, tras gana el concurso público por el ayuntamiento<sup>2323</sup>. Manuel Tuñón de Lara nos deja una perfecta radiografía de la nueva morfología social de los ensanches: *construidos con criterio utilitario y en serie por un sector del capital dedicado al campo de la construcción, estarán concebidos y planeados teniendo en cuenta la circulación más bien que la articulación del conjunto en torno a unos núcleos comunitarios; la vieja función integradora de la plaza o plazuela retrocede frente a la desoladora uniformidad de calles iguales tiradas a cordel. En fin, por encima de toda la compartimentación social urbana se hace cada vez más patente, con una evidencia plástica y monumental, la presencia de un poder incontrastable, trascendente a la misma ciudad, al que cabe referir la fuerza y los prestigios de las distintas elites locales, de los que de una manera u otra mandan en la ciudad: El Estado. Las grandes avenidas de perspectivas majestuosas, flanqueadas por palacetes o edificios en que habitan parte de la clase dirigente, ornamentadas con monumentos que expresan una determinada filosofía o una determinada concepción histórica oficialmente refrendadas; los grandes edificios de la Administración –ministerios, gobiernos civiles, capitanías generales, audiencias, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etc.-; las iglesias de finalidad mayestática y de clara connotación social, presiden la compartimentación social de la ciudad(...). Desde este punto de vista, arquitectura, escultura y pintura –esta última, en el interior de los edificios- son llamadas a cumplir una finalidad social muy concreta: expresar la magnificencia, el poder y la respetabilidad del orden establecido*<sup>2324</sup>.

En una rápida mirada a las primeras disposiciones normativas del derecho urbanístico español<sup>2325</sup> podemos afirmar que no se observa una concienciación histórica de respeto a los barrios que iban a ser derribados en el afán modernizador de la ciudad, por lo que desde la respuesta legal en la etapa isabelina no encontramos aún una visión conservacionista de los llamados cascos antiguos. Las alineaciones fueron los antecedentes inmediatos del aparato legal de carácter urbanístico, siendo codificados por la Real Orden de 25 de julio de 1846, por lo que se debían de levantar planos geométricos y proceder a cartografiar las calles, que se completaría con la Instrucción de diciembre de 1859, donde se dispuso obligatoriamente que en todos los municipios de más de ocho mil habitantes se levantase un plano. Al mismo tiempo se establecerían una reglamentación de la altura y distribución de los pisos mediante la Real Orden de junio de 1854. En los casos de los ensanches de las ciudades de Madrid y Barcelona se fueron promulgando un amplio

---

<sup>2323</sup> CALVO SANCHEZ, Jesús *Crecimiento y estructura urbana de San Sebastián*. San Sebastián, 1983.

<sup>2324</sup> TORTELLA CASARES, Gabriel *Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo en Historia de España*, Tomo VII (Coord. Manuel Tuñón de Lara). Madrid, 1993. pp. 326-327.

<sup>2325</sup> BASSOLS COMA, Martín, “Los inicios del derecho urbanístico en el periodo del liberalismo moderado y el sexenio revolucionario (1846-1876): el Ensanche de la ciudad como modelo urbanístico y sistema jurídico. Ciudad y Territorio. *Estudios territoriales*, XXVIII, nº 107-108, Nº especial: Siglo y medio de urbanismo en España, pp.19-52.

número de disposiciones normativas por el que se regulaba con gran precisión todo lo referente a los problemas urbanísticos que podían generarse, tanto con respecto a los particulares como con los intereses públicos. Entre estas disposiciones cabe destacar Real Decreto de 8 de abril de 1857 autorizando al Ministro de Fomento para formular un proyecto de ensanche de Madrid (Gaceta de Madrid, 14 de abril de 1857; Colección Legislativa, Segundo Trimestre de 1857, Tomo LXXII, 1857, pp.76-80), en cuya Exposición de Motivos de la primera disposición ya aparece reflejada los problemas sociales y económicos que había resultado del incremento de la población y que había conllevado la planificación del referido ensanche: *El aumento de población que en estos últimos años ha experimentado la capital de la Monarquía, las grandes mejoras que en breve deben plantearse en ella, transformándola, puede decirse, por completo, y, sobre todo, las nuevas necesidades creadas por los adelantamientos del siglo, reclaman imperiosamente el ensanche de la Corte, asunto que vienen ocupándose hace largo tiempo la opinión pública y la municipalidad, sin haber obtenido hasta ahora resultado alguno inmediato. Madrid es uno de los pueblos que, en proporción de su vecindario, menor superficie tiene destinada, en su recinto interior, a paseos plazas y otros desahogos tan necesario para el movimiento y el tráfico, como bajo el punto de vista del ornato y de la salubridad. Al paso que otras grandes ciudades, atravesadas por caudalosos ríos, cuentan en su parte céntrica hermosos parques y plazas espaciosas, la capital de España no contiene un solo paseo dentro de su caserío; y barrios formados por estrechas calles, sin más interrupción que algunas reducidas plazuelas, ocupan sus más pobladas localidades.* El hecho de haber convertido a Madrid en la capital administrativa del Reino haría necesario una profunda transformación, por lo que había que formar, *en fin, la lista de todas las vías, paseos y edificios necesarios, y abrazando en su vista el territorio que para la buena distribución de estas diversas construcciones reclame el ensanche, por lo que se pasaría a designar los terrenos que han de destinarse a una multitud de edificios públicos, de que hoy carece Madrid, entre los cuales basta enumerar ahora una catedral, diferentes mercados, escuelas, hospitales, casas de lavabo y baños para pobres, cárceles, cuarteles y campo de ejercicios, habitaciones para obreros y otras construcciones.* Con los mismos términos aparecería en el Real Decreto de 23 de enero de 1856 nombrando una Comisión para que proponga la resolución más acertada en las cuestiones del proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona, en la **Real Orden de 7 de junio de 1859**, en el que sería aprobado el proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona y la **Real orden de 31 de julio de 1859** disponiendo lo necesario para la ejecución del proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona.

Los ensanches pronto tendrían una pronta respuesta jurídica, con el proyecto de Ley de 1861 presentado por el Ministro de Gobernación, José Posada Herrera, que aunque no llegó a convertirse en Ley, Bassols, lo define como el primer intento de coordinación unitaria de la problemática urbanística. Sus planteamientos urbanísticos eran muy novedosos, ya plasmado en su Exposición de Motivos, donde se expresa cual el objetivo primordial de la

regulación de los ensanches: (...) *la escasez y carestía de habitaciones, que sólo pueden remediarse con los ensanches de la población y el consiguiente aumento de edificios nuevos que, estableciendo la concurrencia, hagan bajar el precio de los inquilinatos y resuelvan el difícil problema de alojar en nuestras antiguas y estrechas ciudades las numerosas clases obreras que ha de producir el desarrollo del trabajo, de la industria y de la actividad pública.* En el artículo 2º se definía por obras de reformas interior aquellas que tuviera objeto de *prolongar, abrir o suprimir alguna de sus calles* y en el artículo 4º se especifica que eran obras de ensanches *las destinadas a proporcionar mayor extensión a las poblaciones para su desarrollo y engrandecimiento.* De gran novedad jurídica fueron el articulado dedicado a los derechos y deberes de los propietarios por razón de urbanismo, como eran la cesión obligatoria del terreno por viales, la edificación forzosa bajo pena de enajenación o la contribución a la realización de las obras de urbanización, abrían nuevas perspectivas a la urbanización que darían al traste al no ser aprobados<sup>2326</sup>. No llegaría el primer instrumento jurídico hasta el periodo final de la etapa isabelina, concretamente con la Ley de Ensanche de Poblaciones de 1864, y su posterior Reglamento para la ejecución de la Ley de Ensanche, del 25 de abril de 1867, en la que era definido como *incorporación de los terrenos.* A pesar de ello, la mayor parte de los ensanches no se pudo realizar hasta los años de la Restauración

#### **1.6.3.2. La configuración de la plaza pública como nuevo escenario económico-social y las transformaciones del tejido urbano conventual en la España isabelina. La plaza del Sol.**

La historiografía artística considera unánimemente como la reforma de la Puerta del Sol fue uno de los hitos de transformación más importante del urbanismo isabelino, y probablemente de la historia urbanista española de todos los tiempos, al convertirse en la primera actuación interior de una población según mecanismos modernos de intervención urbanística<sup>2327</sup>, donde se fue cuajando la idea de la superposición de un incipiente principio de utilidad pública que delimitase la configuración de un espacio urbano reflejo de la nueva realidad social que se había ido fraguando con los intereses de la burguesía. Francisco Calvo Serraller lo puntualiza en los siguientes términos: *La piedra de toque de la transformación urbanística del Madrid isabelino y, por extensión, ejemplarmente, de la significación del ensanche interior en nuestras ciudades, fue, sin lugar a dudas, la Puerta del Sol. El tema tiene su importancia si tenemos en cuenta que suponía afrontar un proyecto global de reforma precisamente en la zona urbana más conflictiva de Madrid, su organismo más vivo y representativo*

---

<sup>2326</sup> BASSOLS COMA, M., *Los inicios del derecho urbanístico en el periodo del liberalismo moderado y en el sexenio revolucionario (1846-1876): el Ensanche de la ciudad como modelo urbanístico y sistema jurídico* en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, n.107-108, Madrid, 1996.

<sup>2327</sup> Sobre la transformación urbanística de la Puerta del Sol y su plasmación en el derecho urbanístico, BASSOL COMAZ, M., pp.151-168; BAHOMONDE MAGRO, A; TORO MEDINA, J. *Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX.* Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1978.

(...) *La capital había dejado de ser el escenario feudal del patronazgo del rey y ahora funcionaba al amparo de los intereses de las clases activas –industriales y comerciales–; es decir, era asunto que competía al interés público y, por tanto, a la financiación pública. Por otra parte, los tradicionales criterios estéticos desaparecían ante nuevos ideales funcionales: no hay que olvidar que una de las motivaciones que apremiaron más a la reforma fue, en este caso concreto de la Puerta del Sol, los problemas de circulación que planteaba. Por supuesto que si leemos algunos artículos de El artista, o, en general, muchas de aquellas notas de alarma y denuncias que los escritores prodigaron por la época, apreciaremos en medio de este furor de transformación, no pocas quejas y nostalgias ante la desaparición de rincones típicos y monumentos tradicionales, pero el espíritu general del progreso hacía tiempo que había apostado por las ventajas de la utilidad y las posibilidades infinitas de la nueva técnica. En una misma línea, Navascues delimita el carácter de utilidad pública que se puede apreciar en las transformaciones que se iban a ir delimitando en la Puerta del Sol: Si unos proyectos, como los de Carlos III para el Salón del Prado, por ejemplo, estaban pensados para ornato de la corte, la reforma de la Puerta del Sol está entendida sustancialmente como de necesidad y de utilidad pública, siendo su belleza meramente adjetivo (...) Y tercero, mientras los autores de las trazas del citado Salón eran sobre todo, artistas, arquitectos, hombres estrechamente vinculados a la Academia, por el contrario, los autores del proyecto definitivo para la reforma de la Puerta del Sol fueron ingenieros, hombres fundamentalmente calculadores y prácticos, relacionados con la construcción de caminos y canales (...).*

Pero al mismo tiempo la consagración del principio de utilidad pública escondía un claro problema jurídico, el conflicto entre interés público y privado. Nuevamente Francisco Calvo dará la clave de ello en los siguientes términos: *Para verificarlo no hay más que seguir el abstruso, aunque más que significativo, debate jurídico que acompaña la planificación y la realización de las obras (...) en él veremos unas y otra vez representados los nuevos criterios: derecho de propiedad y ley de expropiación, financiación de las posibles indemnizaciones, ventajas y desventajas de los propietarios con los derribos. Fue ésta indudablemente la cuestión de base, más que la serie sucesiva de planes que se fueron elaborando como si la cuestión se pudiera limitar a elegir simplemente entre unas técnicas u otras. Con la promulgación del **Real decreto de 15 de febrero de 1854** sería aprobado el proyecto por la Junta de Policía Urbana de Madrid para el ensanche de la Puerta del Sol. La lectura de su Exposición de Motivos refleja ya el triunfo del principio de la modernidad urbanística en la proyección de los espacios urbanos de inspiración burguesa: Varias y de no de leve importancia en general son las mejoras que de algunos años á esta parte se han realizado en la Corte, debidas unas al generoso desprendimiento de V.M., otras al celo de la Corporación Municipal o al interés de los particulares. Pero todavía falta mucho para que a semejanza de capitales de análoga categoría reúna Madrid cuantas condiciones exigen las inmensas necesidades de una numerosa y culta población que crece y prospera de día en día. Entre estas necesidades ocupa un lugar muy preferente la de ensanchar algunos de los sitios más concurridos; sitios en los cuales la gente se aglomera y detiene con frecuencia, dificultando el tránsito, y haciéndolo a veces incómodo y aún peligroso. De todas las reformas de esta clase que, por tal*

*razón y por motivos de higiene pública, conviene llevar a cabo en Madrid, ninguna excede en importancia, ninguna es de tanta urgencia como la de la Puerta del Sol, encrucijada hoy en día de forma irregular, de poco agradable aspecto, de escaso ámbito, y de no suficiente desahogo en las ocasiones de gran concurrencia. La Junta consultiva de policía urbana, a la que se ha encomendado entre otras cosas el examen y rectificación de los proyectos y alineaciones de las calles de Madrid, al estudiar lo concerniente a las que en la Puerta del Sol desembocan, fijó desde luego su atención en el centro común a que afluyen, y comprendió la necesidad de ensanchar varias de ellas, de suprimir alguna de mal aspecto, de regularizar en lo posible la desembocadura de todas, y de dar más amplitud a aquel sitio, convirtiéndolo en una gran plaza, comparable a las más bellas de Europa, de decoración adecuada y uniforme, y susceptible de ser hermoseada con grandes fuentes de abundante caudal, y con monumentos de arte dignos de la capital de la Monarquía.* Unos meses después sería promulgada la **Real orden de 22 de abril de 1854**, por el que sería declarado de utilidad pública el proyecto de ensanche, alineación y ornato de la Puerta de Sol de esta corte, para los efectos de la ley de expropiación. Aunque no es lugar en este estudio el análisis jurídico de los conflictos que fueron generados entre los intereses particulares y del propio Municipio, cabe mencionar que se dictaron una exhaustiva normativa en la que se preceptuaba minuciosamente el modelo de caserío que debía de ser construido a raíz de la promulgación de la Real orden de 10 de junio de 1854 dictando reglas para la instrucción de los expedientes de construcción de casas en Madrid, en la que se incluiría el procedimiento administrativo que debía de ser cumplido por los particulares, las prerrogativas otorgadas a las Corporaciones Municipales y el papel que debían desempeñar los arquitectos municipales y sus posibles controversias con los arquitectos particulares. Sin embargo, con la llegada al poder de la Unión Liberal el espíritu inspirador de las disposiciones normativas van a una profunda transformación, al significar el triunfo definitivo de los intereses públicos sobre los particulares, como así sucedería con la promulgación de la **Real Orden de 16 de enero de 1856** mandando se encargue una Comisión especial de examinar el expediente instruido sobre las obras necesarias para el ensanche de la Puerta del Sol. En la Exposición de Motivos nuevamente se resaltaba la significación política de la obra en cuestión: *El ensanche, regularización y embellecimiento de la Puerta del Sol, centro antiguo y constante del movimiento mercantil y social de la capital de la Monarquía, es una necesidad tan universalmente sentida y con tal solemnidad proclamada, ya tanto por los Representantes del país, como por su Gobierno (...)* Sobre ese cimiento sólido por su legalidad y justicia, convenía que se levantasen los edificios del sitio, hasta ahora histórico, y dentro de poco monumental, cuyo nombre y recuerdos están para siempre unidos al de la heroica villa que tiene la honra de ser metrópoli de las Españas. El conflicto surgiría por el respeto de las distintas posiciones de los particulares, especialmente a la hora de ser expropiados por utilidad pública y de la propia subasta pública a celebrar: *el Ministro de la Gobernación no se creyó todavía en el caso de proponer a V.M. una resolución definitiva, porque en su sentir, siempre que la acción administrativa se roza con los*



*sagrados derechos de la propiedad particular, no hay ni precaución exagerada, ni detenimiento en proceder que pueda tacharse de nimio. Y en efecto, por una parte muchos de los propietarios de los edificios actuales de la Puerta del Sol y sus calles adyacentes pretendían, que según la ley de 27 de julio no era lícito aplicar las prescripciones de la general de expropiación por causa de utilidad pública más que a la porción de sus fincas que fuera necesaria para el ensanche y regularización de la plaza misma, y por otra ya se pretendía que se dejase libertad a cada uno de edificar por sí, sujetándose a los planos que el Gobierno aprobara, ya que la presentación de planos y proposiciones confería derechos a sus autores. Así las cosas pareció conveniente oír al Tribunal Supremo Contencioso-administrativo sobre las cuestiones de propiedad; y robustecido el Ministro, aunque sin declinar parte alguna de su responsabilidad, con el autorizado parecer de tan ilustrado y respetable cuerpo, cree ya llegado el caso de acudir a los pies del Trono, como lo verifica respetuosamente, y previo acuerdo del Consejo, a rogar a V.M. se digne dar su Real aprobación al proyecto de decreto que acompaña. La solución adoptada sería la pública subasta de la ejecución de las obras, por término de veinte días, comprometiéndose los adjudicatarios a realizarlas en el plazo de dos años y medio, con estricta sujeción a los planos y condiciones económicas y facultativas que había sido decretado (art.2). La medida sería aprobada definitivamente en la **Real Orden del 24 de junio de 1856 aprobando la subasta para la ejecución de las obras de la Puerta del Sol**<sup>2328</sup>. Ante estas discrepancias podemos perfilar que la cuestión de embellecimiento del espacio público quedaba en un segundo plano, aunque se dispondría una amplia normativa como fueron la **Real Orden de 7 de diciembre de 1856** disponiendo que pase al Ministerio de Fomento el expediente instruido sobre el proyecto de ensanche y embellecimiento de la Puerta del Sol, con todas sus incidencias, **el Dictamen de 25 de mayo de 1857** de la Comisión autorizando al Gobierno para proceder a la ejecución de las obras de ensanche y embellecimiento de la Puerta del Sol, **la Ley de 28 de junio de 1857** autorizando al Ministro de Fomento para proceder a la ejecución de las obras de ensanche de la Puerta del Sol, concretamente el proyecto de decoración arquitectónica que el Gobierno apruebe, oyendo a la Academia de San Fernando (art.1). Los años posteriores estuvieron marcados por una amplia restructuración de la plaza, quedando reflejada en las páginas de las revistas ilustradas del momento<sup>2329</sup>.*

### **1.6.3.3. El derribo de la muralla: la controversia entre los principios de ornato y salubridad e higiene en la España Isabelina.**

Una de las cuestiones que más han suscitado una polémica en el ámbito español ha sido sin duda alguna el derribo de los amplios lienzos de murallas que circundaba las urbes hispanas, como testimonio de su amplio pasado medieval e incluso en algunos casos romanos. En una lectura superficial del

<sup>2328</sup> QUIROS LINARES, Francisco “La construcción del centro urbano. Política y especulación en la reforma de la Puerta del Sol (1853-1862)”, *Ería, Revista de Geografía*, 4, pp.81-91.

<sup>2329</sup> MARTI, Victor, Reforma de la Puerta del Sol, *Revista de Obras Públicas*, 1859, 5, pp.53-59; 7, pp.77-80; 8, pp.89-91; 11, pp.125-129; 16, pp.189-194; 18, pp.213-215; 20, pp.237-238.



hecho nos llevaría a pensar que en cierta manera por parte de la administración existía en este momento una falta de toda concienciación patrimonial, pero sin embargo ahondando en el problema observamos que en realidad las circunstancias económicas y sociales del momento aconsejaron su derribo frente a claros valores históricos, que incluso en algunos sectores intelectuales no consideraban como bienes pertenecientes al patrimonio histórico-artístico de una nación, sino que se contemplaba como un factor de decadencia y barrera del progreso. Las murallas habían tenido en realidad especialmente un significado militar, la defensa de la ciudad y nunca se habían considerado como elemento de recreación estética, por lo que en los albores de la industrialización y en una época de renovación de la maquinaria bélica, había perdido su utilidad práctica. En la etapa isabelina la mayoría de las cercas amuralladas habían perdido todo su funcionalidad, ya que desde los comienzos de la Edad Moderna, no se habían construidos, ni en algunos casos se habían mantenido sus reparaciones, sola aquellas que se insertaban en aquellas ciudades que defendían costas y fronteras. Como apunta Francisco Quirós *la pérdida de funcionalidad de las murallas medievales alcanzaba su grado más patético en aquellos casos en que el recinto amurallado, incómodo por su emplazamiento enriscado, había quedado prácticamente yermo, mientras una nueva población crecía a sus pies. Los muros, con frecuencias ruinosos, de la antigua villa ahora desierta, no encerraban otra cosa que una iglesia solitaria y, acaso, el cementerio*<sup>2330</sup>. La muralla, carente de utilidad, se encontraría desbordada por el crecimiento de los arrabales que habían ido surgiendo desde la etapa medieval, que incluso aparecían embebidas en edificios empotradas sobre el lienzo. A ello se unían las puertas y pasadizos que en cierta manera impedían la circulación del tráfico mercantil<sup>2331</sup>.

A lo largo de la etapa isabelina se irían derribando en las ciudades españolas los cercos de las murallas, no sin amplios obstáculos técnicos, económicos y sociales. Entre las más significativas fueron las ya citada de Barcelona, en 1854, la de Burgos, en 1831, Almería en 1854, San Sebastián en 1864, Valencia en 1865, y en algunos casos el derribo se prolongaría durante todo el siglo como ocurrió en la ciudad de Granada, cuyas murallas se habían destruidos parcialmente en la Guerra de la Independencia, para posteriormente ser derribadas desde 1833 hasta finales de siglo. Destruir la muralla se había convertido en un verdadero objetivo de todo planteamiento urbanístico. La muralla se convierte sin ninguna duda para las nuevas ciudades industriales en

---

<sup>2330</sup> QUIROS LINARES, Francisco, 2009, p.57.

<sup>2331</sup> Los datos proporcionados por Francisco Quirós son fehacientes: la muralla de Cuenca tenía seis puertas y tres postigos, estando destruidas en muchas partes y confundida con las casas; en Huesca, iban desapareciendo bajo las casas que se iban edificando sobre ella, y de sus 99 torres solo quedaban dos; las murallas de Jaén, aunque ofrecía aún trozos bien conservados, estaba en buena parte embebida en las casas y muchas de sus puertas ya no existían. En Granada se conservaba el sector septentrional del recinto; Guadalajara no mantenía sino pequeños trozos suyos (...). Cfr. QUIROS LINARES, F., 1991, p.58.

un verdadero obstáculo de expansión económica, *se ahogaba dentro de sus murallas*, como fue el caso de Barcelona, ya que desde 1750, habría reactivado su comercio después de los negros episodios de la Guerra de Sucesión al haberles impuesto amplias restricciones, por lo que necesitaba de nuevos espacios para ir instalando los nuevos tejidos industriales, por lo que al principio del siglo XIX, al no ser autorizado la demolición del recinto amurallado, hecho que llevó a la creación de nuevos barrios extramuros, como fue el caso de la Barceloneta, por lo que desde 1843 se asistió a una verdadera cascada de peticiones municipales y particulares. La causa de la paralización del derribo de la muralla no debemos de buscarlo por fundamentos de carácter históricos-artísticos sino que las imposiciones militares fueron las que delimitaban todavía la función de la defensa de la ciudad<sup>2332</sup>. Bassols apunta como la pervivencia de la legislación sobre Fortificaciones y Plazas Fuertes prevista en la Novísima Legislación y en las Ordenanza del Real Cuerpo de Ingenieros Militares de 1803 se convirtió en un referente para no ser derribada las defensas de la ciudad, de ahí que no sería hasta 1859 cuando se autorizaría su demolición, por lo que la incipiente industrialización tuvo que conformarse hasta este momento en situarse en algunos arrabales de la ciudad. El caso de Madrid también tiene una especial significación con respecto a sus murallas medievales, que debido a su incremento demográfico por lo que se estaba quedando hacinada la población. Otro punto de apoyo para la destrucción de la muralla lo tuvo el hecho de que en estos años la llegada del ferrocarril a los principales centros urbanos dio pie a pensar que los circuitos defensivos eran unos verdaderos obstáculos para ello. Al mismo tiempo las nuevas disposiciones higiénicas como pudo ser el abastecimiento del agua se veían impedida por los recintos amurallados, por lo que se sugería su eliminación. Sin embargo, no cabe duda que frente al matiz de utilidad en que estaba inmersa la destrucción de las murallas, existía también paralelamente unas ciertas dosis de la llamada especulación urbanística.

El derribo de las puertas de Sevilla comienza ya en el año 1858 y se prolongará hasta 1873 con la caída de la Puerta del Sol. Hacia el año 1859 tras la aprobación de alineación para las Afueras de la Puerta de Triana, se iniciaron las gestiones oficiales con el inicio de un expediente municipal con el objetivo primordial de analizar el derribo de la cerca por el sector de la puerta de Triana y sus aledaños, para lo que el Ayuntamiento se dirigiría al Gobernador Civil de la provincia para recabar los permisos necesarios. A su vez, la institución municipal se dirigiría a la Comisión de Monumentos para que hiciera un informe sobre el estado de la cuestión, para lo que se pidió que señalase cual sector de la muralla tenía que ser conservada, lo que daría lugar a una serie de litigios entre las instituciones tutelares del Patrimonio Urbano Monumental, la propia Comisión y la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, y las instituciones administrativas, el Ayuntamiento y el Gobierno Civil. Sin

---

<sup>2332</sup> ESTAPÉ

embargo, como ocurrió en la mayoría de las poblaciones españolas, los intereses económicos comenzaron a primar al achacarse que las malas condiciones de este espacio urbano había impedido su crecimiento poblacional y de nivel de rentas, unida al hecho de que limitaba las comunicaciones con el interior, por lo que se fue tomando conciencia en todos los ambientes mercantiles que la muralla se había convertido en un verdadero obstáculo. No cabe duda que las distintas instituciones tutelares del Patrimonio Urbano Monumental no estuvieron a la altura de las circunstancias. En la propia Corporación Municipal se abriría un amplio debate, por lo que en el seno de la propia Sección de Obras Públicas Municipal se fueron argumentando otros principios preferenciales que se superponía a lo puramente estético, como era el desarrollo de la población, las justas aspiraciones de mejorar los predios existentes extramuros o evitar que se hiciera de peor condición a los propietarios y vecinos de los arrabales que mantenían con las murallas una distinción odiosa, cuando sin ellas podrían prestárseles la misma atención que a los del centro de la ciudad<sup>2333</sup>. Un caso llamativo sería el derribo de la Puerta Real, en el que en 1864 el propio Pagés del Corro pondría de manifiesto la conveniencia de derribarlas, al considerar que carecían de objeto al no servir para la defensa de la ciudad ni lograr evitar que se introdujeran mercancías sin pagar consumo. Incluso la Comisión de Obras Públicas propondría al Alcalde su derribo, ya que su supresión, como recoge literalmente el Informe que enviarían al Alcalde, no supondría perjuicios al vecindario en épocas de avenidas puesto que la precede un terraplén extensísimo a la altura máxima que puede alcanzar las aguas, e incluso se apuntaba que por su propia ubicación entorpecía el tráfico naciente desde que se hubiera inaugurado la Estación de Ferrocarril de Córdoba, situada en frente de ella, y que se había convertido en salida obligatoria de este punto de la ciudad. De la misma manera, el informe favorable de la propia Comisión de Obras Públicas ayudaría el derribo de la Puerta de la Carne en 1864, o la propia Puerta del Arenal, que después de la autorización de la Comisión de Obras Públicas al Alcalde, siempre que estuviese realmente ruinosa a juicio de los peritos, aunque como era preceptivo se solicitaría el informe de la Academia de Bellas Artes, que nuevamente apelo sin poder hacer nada su valor estético, aunque no con mucho ímpetu tal como se deduce de sus propios términos: *Que si bien la puerta en cuestión pertenece a una época de mal gusto no es su deformidad tal, que pueda decirse ofende al sentido común y reclame por consecuencia la destrucción del edificio*, por lo que el 12 de febrero de 1864 sería aprobado por la Comisión de Obras Públicas, siendo derribado en los meses siguientes. Algunas puertas serían adquiridas por la propia compañía de ferrocarril, por lo que se insertaban en el seno del dominio privado, como fue el caso de la puerta de la Barqueta, que en virtud del contrato de 1856, la Compañía Ferroviaria la compró, derribándola

---

<sup>2333</sup> SUAREZ GARMENDIA, José Manuel, *Arquitectura y Urbanismo en Sevilla durante el siglo XIX*, Sevilla, Diputación Provincial, 1987, pp. 201-204.

posteriormente entre 1857 y 1858, trazando la vía justamente por el ojo de la puerta. Curiosamente el **Informe de 15 de mayo de 1860** de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría fue favorable al derribo del sector de la muralla de la Puerta de la Barqueta. Como apunta Antonio de la Banda dicha demolición se había solicitado por la propia empresa ferroviaria que deseaba demoler las citadas puertas, comprometiéndose a construir en su lugar dos nuevas similares a las de Jerez, así como el lienzo de muralla existente entre ambas<sup>2334</sup>. Finalmente cabe citar el informe del 8 de mayo de 1861 que emitió la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría sobre pregunta emitida por el propio Ayuntamiento: 1º. Que el trozo sito entre las Puertas, Real y de la Barqueta, no hay inconveniente alguno de derribarlo por ser su construcción moderna y de escaso mérito en su forma y hallarse ya la mayor parte derribada; 2º. Que por su antigüedad y mérito en la construcción y proporciones, deben conservarse los trozos de murallas, comprendidos entre la Puerta de la Barqueta y Macarena; esta y la del Sol hasta la del Osario y especialmente entre estos el que está frontero al Hospital de la Sangre, que sin ser de construcción romana como vulgarmente se supone es un bello ejemplar de la Arquitectura Militar de los Arabes; 3º. Los demás trozos de la muralla por hallarse restaurado en diversos tiempos y ser muy escaso su interés artístico, no deben impedir el desarrollo de la población siempre que este sea necesario, evitando las consecuencias de querer derribar sin exigirlo las nuevas construcciones, por el temor de que queden expuestos a la vista arrabales repugnantes y de pésimo aspecto que harían bien poco a nuestra culta población. La Academia cree que respecto a este particular procederá la Municipalidad con el debido detenimiento con objeto de no derribar sino cuando la imperiosa necesidad lo reclame y tenga la seguridad de que las murallas habrán de ser sustituidas inmediatamente por construcciones que lejos de afean embellezcan los alrededores de la población y 4º La Academia acogiendo las legítimas exigencias del público en punto al buen aspecto y procurando al mayor ornato de los edificios notables de Sevilla, insta a la Municipalidad a que obteniendo la venia de quien corresponda, consiga el que se derribe la parte de la muralla que cierra la Fábrica de Tabacos e impide que se disfrute de la vista de su hermosa fachada.

## **2. Los límites de la intervención estatal en el ámbito del dominio privado del Patrimonio Monumental.**

### **2.1. El deber de conservación de los propietarios de los bienes inmuebles de interés histórico-artístico en la España Isabelina: un primer ensayo de la intervención administrativa en el ámbito del derecho de la propiedad privada.**

<sup>2334</sup> DE LA BANDA, Antonio, pp.190-194.

Como apunta Ricardo Cantero Anguita se va a ir sustrayendo en el periodo isabelino como precedente de la Restauración unas limitaciones del derecho de uso y disposición de los bienes inmuebles de los propietarios privados, que van más allá de una defensa del ornato de las fachadas a conservar, sino que incluso se va a ir introducir una reglamentación del interior de las propias viviendas, teniendo como resultado una verdadera intervención administrativa en el régimen absoluto de la propiedad privada: *Ya en el siglo XIX, y dentro de la regulación espacio público-espacio privado aparece, junto al carácter figurativo de las ordenanzas, un nuevo factor vinculado al valor económico que adquiere la propiedad urbana. La Ordenanza de Calle deberá limitar el grado de edificabilidad de las nuevas construcciones atendiendo a la latitud de la vía pública y preservar, de este modo, las adecuadas condiciones higiénicas no sólo del espacio de la calle, sino también del interior de la vivienda, Este tipo de reglamentación se limitará, en un primer momento, a realizar su regulación a través del plano de fachada, único espacio susceptible de someterse a la intervención pública, surgiendo de este modo, junto a disposiciones relativas a la limitación de la altura de las edificaciones, de origen ilustrado, otras dedicadas a reglamentar el número de pisos edificables o a fijar un valor mínimo para la altura de cada uno de los pisos. Sólo en el último tercio del siglo, la reglamentación edificatoria conseguirá superar el límite que supone la fachada e introducirse en el interior de la edificación, estableciendo nuevas disposiciones que garanticen unas mejores condiciones de higienes para las viviendas*<sup>2335</sup>. En este sentido se puede destacar un amplio número de disposiciones normativas referentes a la tutela de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico tanto en la Década Moderada como durante el periodo de la Unión Liberal, que en principio contrarrestaba con el principio de defensa absoluto de la propiedad privada, recogido en el propio constitucionalismo.

#### **2.1.1. Los límites del derecho de los propietarios privados de los inmuebles de interés histórico y artístico en la legislación urbanística isabelina.**

Aunque desde los reglamentos urbanísticos del Antiguo Régimen, existían una serie de principios inspiradores por la autoridad pública en aras a la construcción, es cierto que el propietario de los inmuebles en cierta forma durante el periodo isabelino, gozo de una amplia libertad a la hora de actuar sobre su inmueble. Sin embargo, con la formación de las nuevas Ordenanzas Isabelinas comenzaron a introducirse una serie de normativas que el propietario de las fincas debían de cumplir, y que Ricardo Anguita distingue en dos bloques: 1º) Los instrumentos de control económico de la propiedad urbana, que posibilita por un lado, la creación de un aparato administrativo-fiscalizador de la propiedad y de la carga tributaria que el individuo burgués debe soportar al sistema establecido, y legitima jurídicamente, por otro, el derecho de

---

<sup>2335</sup> ANGUITA CANTERO, Ricardo, *Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la Reglamentación Edificatoria en España (1750-1900)*, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Granada, 1997, p.352.

propiedad sobre el suelo urbano, estando entre los primeros los Repartimientos de la Contribución Territorial de Bienes Inmuebles, antecedentes del Catastro, que había que esperar hasta el siglo XX para su definitiva aparición, después de una serie de intentos fallidos y entre los segundos estarían la Contaduría de Hipotecas y el Registro de la Propiedad y 2º) los Instrumentos de control urbanístico-edificatorios, que se englobarían dentro del ramo administrativo de Policía, que estarían insertados en las Ordenanzas Municipales referente a edificación, los reglamentos municipales de Ornato y Construcción<sup>2336</sup>. Un caso paradigmático del límite del derecho del propietario en este momento sería la petición del permiso o licencia municipal sobre la forma de ejecutar las obras y la composición arquitectónica de los edificios: *Los respetables derecho de propiedad no sustraen a los que intentan labrar algún edificio de aquella dependencia, que en ciertos puntos corresponde al Magistrado como depositario en esta parte de los derechos del público. Es peculiar y propio del dueño de la finca la repartición y distribución del terreno: lo que es igualmente del mayor o menor adorno que quiera poner, como también lo demás que respecta a la comodidad, economía y utilidad del edificio; pero no es arbitro de faltar a las reglas de la Arquitectura; poner adornos caprichosos, cortar la rectitud de la calle; impedir la ventilación... y desfigurar el aspecto con adornos extravagantes, que impongan a la Nación la nota de ignorante y poco instruida.* Así en las Ordenanzas de Barcelona de 1857, como el resto de las promulgadas en este periodo, aunque se confía al propietario la más completa libertad arquitectónica para su edificación, siempre que su diseño sea acorde con las reglas del arte arquitectónico, que en este momento son, esencialmente, las de regularidad y simetría de los huecos situados en la fachada: *Todo propietario es árbitro de adoptar para la fachada de su edificio el tipo de arquitectura que más le plazca, mientras el proyecto no sea un conjunto caprichoso sin relación ni carácter. No se consentirán adornos extravagantes en las fachadas, ni los que no estén en armonía con el destino y carácter del edificio. A lo que se añade: el pintado o color de la fachada deberá escogerse de entre los que tiene aprobados la Municipalidad y se hallan de manifiesto en la Secretaría.* Como apunta Ricardo Anguita Cantero la licencia municipal viene a cristalizar las necesidades de limitación del iusaedificandi, demostrando que el carácter absoluto de la propiedad privada queda, desde este momento, relativizado. Y es que para su obtención era necesario presentar una instancia ante la Comisión de Ornato en la que el propietario solicitara su concesión, siendo obligatorio la presentación del diseño de la fachada del edificio, e incluso comunicar el arquitecto que iba a intervenir en la obra, que tenía que haber sido aprobado por la propia Academia. Al término de la obra el propietario debía de notificar la finalización de la obra para que fuese inspeccionada por el Arquitecto Municipal a fin de comprobar su ejecución conforme a la licencia otorgada<sup>2337</sup>.

<sup>2336</sup> ANGUIA CANTERO, Ricardo, 1992, pp.465-466.

<sup>2337</sup> ANGUIA CANTERO, Ricardo, 1992, pp.476-477.



Sería en los procesos de la declaración de ruina de la edificación mediante la denuncia administrativa donde se aprecia aún más la intervención del Estado en el ámbito particular del propietario. La explicación nos lo da el propio Ricardo Anguita: por motivos económicos, los Ayuntamientos rechazan, generalmente, el sistema de expropiación por utilidad pública de las fincas sometidas a alineación para la consecución inmediata de las alineaciones aprobadas, ya que resultaba excesivamente oneroso el tener que indemnizar al propietario no sólo el terreno de las fincas privadas que pasaba a viario público sino también la edificación que debía ser derribada. Como método más factible económicamente había que adoptar un sistema de espera que alargaba la realización del proyecto de alineación hasta el momento en que el propietario decida proceder a la reedificación de su finca y entrar, de esta forma, en la nueva línea. Sin embargo, una perfecta alternativa, que salva el problema, se consigue mediante la creación de un mecanismo que facilitará una rápida consecución del sometimiento de las fincas de la alineación proyectada, sin tener que esperar a que el propietario tomara la decisión de reedificar. Este mecanismo consistía en una denuncia administrativa de ruina del edificio por parte de los celadores municipales de Policía urbana o de los propios Arquitectos Municipales ante las Comisiones de Ornato, que encargaban a éstos que procedieran a un reconocimiento de la estructura exterior del edificio y dictaminasen sobre la posible ruina. Si se declaraba la ruina por el Arquitecto Municipal se ordenaba el desalojo y derribo de la edificación por motivos de ornato y seguridad pública, como consta en las Ordenanzas de Policía urbana y rural de Madrid de 1847. Ante la orden de derribo, el propietario podía adoptar una doble actitud, admitir la denuncia y proceder al derribo y consiguiente reedificación de la finca, o bien oponerse a la denuncia municipal, nombrando un facultativo, el Perito 2º, que daría un nuevo informe sobre el estado de las fincas. Al adoptar una actitud favorable al propietario por éste, se debía nombrar un Perito 3º, imparcial a las partes, cuyo dictamen resultaba vinculante, procedimiento reglamentado en la Real Orden de 10 de junio de 1854 sobre reglas que deben observarse en los expedientes de construcción de casas en Madrid<sup>2338</sup>.

### **2.1.2. Un primer ensayo de la intervención administrativa en el ámbito del derecho de la propiedad privada.**

Hacia 1850 se va a promulgar una interesante normativa sobre el ámbito de la restauración inmobiliaria de edificios de interés histórico y artístico<sup>2339</sup>. Aunque en el caso de los edificios de propiedad privada se ejercía

---

<sup>2338</sup> ANGUIA CANTERO, Ricardo, 1992, p.474.

<sup>2339</sup> ANGUIA CANTERO, Ricardo, *Ordenanza y Policía Urbana. Los orígenes de la reglamentación edificatoria en España (1750-1900)*, Granada, Universidad y Junta de Andalucía. 1997.

la voluntad del dueño, se regularon algunas disposiciones que limitaron su actuación. La Real Orden del 4 de mayo de 1850, preceptuando que no se haga obra alguna en los edificios públicos sin previa consulta de la Comisión de monumentos históricos y artísticos, medida nacida a instancia de la propia Real Academia de San Fernando, que había denunciado *el deplorable abuso que se ha introducido en varias capitales, y principalmente en esta Corte, de destruir las fachadas de muchos célebres edificios antiguos con revoques y demoliciones por causa de ornato público*. Unos meses después sería promulgada la **Real Orden de 1 de octubre de 1850**, a raíz de una instancia que había elevado D. José Bover, escultor de cámara residente en Barcelona, en solicitud de *que exija el cumplimiento de la Real Orden de 11 de enero de 1808, por la cual está prevenido que antes de ejecutar una obra, ya sea de arquitectura, pintura o escultura, de las que se costean de fondos municipales ó provinciales, en los templos, plazas y parajes públicos, se obtenga la aprobación de la Real Academia de San Fernando ó de las demás de las de Bellas Artes del reino en sus respectivos distritos, previa presentación de los modelos y proyectos correspondientes*. Se trataba sin ninguna duda de una nueva medida limitadora del derecho de uso y disposición del propietario privado, ya que aunque *tenía derecho a ejecutar cuanto les parezca conveniente en sus respectivas propiedades, debe entenderse tal facultad dentro de ellas, y de ningún modo en las fachadas, capillas y demás parajes abiertos al público*. La promulgación de la **Real Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de septiembre-10 de octubre de 1850**, significaba un mayor hito al poner las bases por el que se regulaba la intervención tanto de los particulares como de las Corporaciones Públicas de aquellos inmuebles de interés histórico y artístico. Ya el primer precepto se referiría directamente a la tutela de los inmuebles pertenecientes al Estado de interés histórico y artístico, que habían sido confiado a la Comisión central, disponiéndose que no hiciera *variación alguna ni en la forma de la planta ni en la ornamentación, ni siquiera cuando sean cedidos á alguna corporación o particular a consecuencia de la Real Orden de 3 de julio*. En caso de que fuese necesario hacer alguna reforma interior, por el objeto *a que hubiesen de destinarse*, debía oírse antes de emprenderla a la Comisión Central (2º). Más precisión encontramos en la tercera disposición al disponer que estas obras nunca podrían tener lugar cuando para realizarlas sea necesario derribar claustros, portadas, galerías y ornatos de conocido mérito artístico (3º), al mismo tiempo que por ningún pretexto se alterasen las formas o se suprimiesen partes de sus fachadas existentes, ni se hiciera en ellas la más pequeña innovación (4º). En caso de restaurarla fuese respetado *el pensamiento primitivo, acomodando las renovaciones al carácter de la fábrica, y procurando que las partes antiguas y las modernas se asemejen y parezcan de una misma época* (5º), disposición muy en la tónica de las discusiones que se estaban produciendo en estos momentos en el ámbito de la restauración científica. Todos estos preceptos debían de ser cumplidos tanto por las Corporaciones como por los particulares a cuyo favor se hubieran hecho las cesiones de los edificios (6º). Serían los Gobernadores de provincias los

encargados de vigilar escrupulosamente las obras que fueran practicados en los edificios cedidos, por lo que serían reconocidas por un arquitecto de su confianza, pudiéndose suspender las obras independientemente *las que se opongan a las referidas disposiciones, y formen el correspondiente sumario, dando parte al Gobierno sin la menor dilación* (7º). Posteriormente, una **Real Orden de 23 de junio de 1851** establecería que no se pase a ejecutar (en la Provincia) ningún edificio ni monumento público del arte, ni a colocar en las fachadas de los que ya existen, como tampoco en el interior de las iglesias o capillas abiertas al culto, siquiera sea de propiedad particular, estatuas, efigies, ni bajos relieves sin someter previamente sus diseños a la Academia de Bellas Artes del distrito respectivo, no debiéndose entender por esto privados los Ayuntamientos de los pueblos la facultad que siempre han tenido de aprobar o desechar, asesorados de sus arquitectos, los diseños de fachadas de los edificios de los particulares. **El 23 de junio de 1851** se publicaría la **Real orden** aclarando la de 1º de octubre último sobre la obligación de presentar a la Real Academia de San Fernando los planos de los edificios particulares que hayan de construirse. Se especificaba que la disposición recaería tanto en edificios públicos, *especialmente sagrados, comprendiéndose en este número aun los que sean de propiedad particular, con tal que estén abiertas al público*. Se haría de conformidad con el parecer de la Academia de San Fernando, por lo que se adoptarían las disposiciones convenientes para que en esta provincia no se pase a ejecutar ningún edificio ni monumento público del arte, como tampoco en el interior de las iglesias o capillas abiertas al público, siquiera sean de propiedad particular, estatuas, efigies, ni bajorrelieves, sin someter previamente sus diseños a la Academia de Bellas Artes del distrito respectivo, siempre respetándose las facultades que se le atribuyesen a los ayuntamientos de los pueblos, especialmente las *de la facultad que siempre han tenido de aprobar o desechar, asesorados de sus arquitectos, los diseños de fachadas de los edificios particulares*. En referencia a estas dos Reales Ordenes, Javier Rivera apunta *como estos conceptos son los primeros de alguna trascendencia teórica en España porque contemplan, el primero la idea de totalidad de monumentos, hasta tanto sean efectuadas las informaciones periciales pertinentes de la Comisión de Monumentos, y el segundo implica posturas teóricas muy definidas, por ejemplo la justificación de las “reconstrucciones”, su realización en el “estilo” del estilo primitivo, la idea de “autenticidad” si se reintegra la forma (...)*<sup>2340</sup>.

En la **Real Orden de 18 de octubre de 1853** se acordaría la regla para la instrucción de los expedientes sobre ejecución de obras en los edificios de los Gobiernos de las Provincias, fueran o no fueran de interés histórico, pudiéndose citar entre las disposiciones contenidas en la misma, la prohibición de emprender obra alguna en los edificios de Gobierno de Provincia sin haber obtenido previamente la autorización oportuna (1º), con la excepción de que se hubiera hundido el inmueble, en lo que el Gobernador podría proceder a

---

<sup>2340</sup>RIVERA BLANCO, José, *De Varia Restauratione. Teoría e Historia de la Restauración Arquitectónica*, Valladolid, 2007, p.97.

ejecutar los reparos de necesidad absoluta y momentánea (2º), estableciéndose una responsabilidad personal del Gobernador, en el caso de que a juicio del Gobierno no tuviese el carácter de urgente, y se ejecutase sin autorización previa (3º). Posteriormente se irían promulgando otras disposiciones que afectarían en cierta manera al régimen del derecho de la propiedad privada, como la **Real orden del 31 de diciembre de 1853** declarando los casos en que puedan los maestros de obras proyectar y dirigir edificios particulares, sin la intervención de arquitectos, que respondía una comunicación de la Academia de Bellas Artes de Barcelona, consultando varias dudas sobre la verdadera inteligencia de la Real orden de 28 de setiembre de 1843, en lo relativo a las facultades de los maestros de obras modernos, resolviéndose *que los maestros de obras pueden proyectar y dirigir por sí solos, edificios particulares en los pueblos que no lleguen a dos mil vecinos, y en los demás que no hubiere arquitecto, siempre que tuviesen en ellos su domicilio; sujetándose de lo contrario a lo prevenido en el artículo 4º de la precitada Real Orden, y no debiendo por tanto encargarse de obra alguna sino bajo los planos y dirección de un arquitecto, sobre todo si le hubiere titular de la localidad o de la provincia, a menos que no fuese fácil la traslación de este al punto de la construcción, en cuyo caso podrán aquellos llevarla a cabo no obstante lo prevenido.*

## **2.2. Los límites del tráfico de obras de arte en la incipiente mercantilización de los bienes de interés histórico y artístico.**

### **2.2.1. El triunfo del coleccionismo burgués en la España Isabelina.**

Durante la etapa isabelina asistimos a una verdadera comercialización de las obras de arte, por lo que a falta de una verdadera regulación normativa del mercado se produjeron una amplia pérdida de obras artísticas. La radiografía de las ventas de las colecciones artísticas pertenecientes a los distintos estamentos sociales nos lo proporciona José Luís Barrio Moya: *Por lo que respecta a la nobleza, que durante siglos había considerado el coleccionismo como consustancial a su clase, va a perder durante el siglo XIX, por mor de las revoluciones liberales, su privilegiada situación al quedarse sin mayorazgos y señoríos. A lo largo de todo el siglo XIX una gran parte de los coleccionistas de la nobleza se limitaron a conseguir que los más célebres pintores de la época realizaran sus retratos más o menos convencionales. Otra poderosa institución que asimismo vio frenada su mecenazgo artístico fue la Iglesia, fenómeno que en realidad no era nuevo, puesto que se había iniciado a fines del siglo XVIII cuando sus encargos a pintores y escultores se limitaron al mínimo (...) Pero también la Iglesia se verá afectada en sus particulares estructuras por las revoluciones burguesas de la época, lo que hizo que se replegase hacia intereses más políticos que artísticos. Todas estas turbulencias sociales que de alguna manera va a trastocar el orden establecido y estamental tendrá como consecuencia directa el ascenso de una burguesía emergente (...) Tras todo este complejo cambio estamental, el siglo XIX va a ver como una burguesía segura de su poder irá ocupando poco a poco, los puestos sociales que durante siglos fueron de absoluta competencia nobiliaria, y por una afán mimético se dedicará,*

*ávidamente a coleccionar obras de arte, tanto por igualarse a la aristocracia de sangre como sobre todo, por un deseo inconsciente de legitimar su status en la sociedad decimonónica*<sup>2341</sup>. En los mismos términos nos lo relata Magdalena Barril Vicente: *En el siglo XIX el coleccionismo no cesa, sino se incrementa (...). Esta nueva situación del coleccionismo lleva consigo el nacimiento instituido de los intermediarios en la compra y venta de antigüedades (anticuarios)(...). La defensa de la propiedad privada es trascendental puesto que los derechos políticos de los ciudadanos y su posibilidad de participar en la vida pública de la nación están relacionados con sus propiedades y su poder económico, el cual puede manifestarse mediante la adquisición de antigüedades y la exhibición de las mismas. No es casualidad que al conocer la biografía de muchos de los coleccionistas, nos encontremos con que tuvieron una activa participación política con mayor o menor fortuna; así Ibarra Manzoni, el Marqués de Salamanca, el Marqués de Cerralbo, etc. Es precisamente entre miembros de la alta burguesía, en muchos casos ennoblecida, donde el coleccionismo tiene numerosos adeptos, consigue sus adquisiciones mediante intermediarios expertos, o a través de obsequios de amistades y conocidos y muestra sus posesiones en los certámenes y exposiciones que se celebran sobre Bellas Artes y Antigüedades en distintas provincias españolas. Sus colecciones son un símbolo de prestigio social (...). Otro grupo de coleccionistas está formado por representantes de la clase media que tienen un puesto en la sociedad por su formación intelectual o política; ésta les lleva a interesarse desde un punto de vista científico por las manifestaciones culturales de nuestros antepasados y por los de otros pueblos, a los que observa desde un punto de vistas curioso y analizador(...).*<sup>2342</sup>. La radiografía que nos muestra Juan Antonio Gaya Nuño es muy pesimista en el ámbito español, ya que las colecciones de pinturas y esculturas se fueron vendiendo e incluso regalando, en el caso de la propia Reina, a coleccionistas extranjeros, por lo que el incumplimiento de la normativa vigente, concretamente las promulgadas por la Reina Regente María Cristina, prácticamente quedaron incumplidas: *Los diplomáticos continuaban sacando toda la pintura que les venía en gana (...). regalaba cuadros de Murillo a personalidades fuera de nuestras fronteras para recompensar o pedir favores. Entre otros favorecidos con estos regalos lo fueron M. Guizot, para pagar la boda de Luisa Fernanda y el Papa Pío IX. Tras el real ejemplo, todo español podía comprender no eran sino letras muertas las órdenes prohibiendo la exportación de cuadros (...). Mientras la Reina regalaba, sus súbditos se dedicaban frenéticamente a vender pinturas a los extranjeros.*

En la revista el Arte de España, publicada en 1868 queda reflejada la intensa actividad comercial de obras de arte que se estaba llevando a cabo en la ciudad de París: *La costumbre de acudir a París, como mejor mercado de curiosidades y objetos, para hallar allí más lucrativa venta, llevando al Hotel Drouot las colecciones de cuadros enajenables, tiene como todas las cosas su pro y su contra. Hallan en París indudablemente mejor precio que en cualquier otra parte, las obras*

---

<sup>2341</sup> BARRIO MOYA, José Luis “Un coleccionista atípico: Don Guillermo Joaquín de Osma” *Goya*, 267, Madrid, 1998, pp.364-365.

<sup>2342</sup> BARRIL VICENTE, Magdalena *El coleccionismo en el Museo Arqueológico Nacional*, pp.178-179.



*de primer orden, que tanto por su importancia artística únicamente, como por el nombre del artista (...) son obras dignas de museos, al que por alto precio las adquiere. Poquísimos son por lo general, los españoles que acuden a París en busca de compradores para sus cuadros, que vuelven contentos y satisfechos del negocio (...) en el pasado verano (se refiere a 1867) se ven dueños de cuadros cuyo mérito artístico nada les importa, y que lo que desean es reducirlos a dinero, bien por causa respetables, o bien porque carecen de afición a las artes. Con ellos llegan al Hotel Drouot, y entre comisiones y derechos, catálogos y artículos en los periódicos y pomposos anuncios de la venta, mal venden sus cuadros (...)*<sup>2343</sup>. Un caso digno de mencionar sería la venta de la colección de obras de arte que habían pertenecido a Alejandro María Aguado, hijo de los condes de Montelirios, nacido en Sevilla en 1785, quien acompañó a Francia a las tropas napoleónicas después de la derrota, permaneciendo en tierras francesas. No se conoce muy bien como formó la colección de sus obras artísticas, pero probablemente se llevaría los cuadros de su ciudad natal. Tras su muerte en Vigo, en 1842, se pondría en venta su colección, celebrándose la subasta en París el 25 de marzo de 1843, que fue subrayada por la propia prensa local por su interés cultural, al comprender 230 cuadros de la escuela española, 128 italianos, 35 flamencos y 50 esculturas. Su muerte y la venta de los cuadros marcarían un hito importante en la dispersión de la pintura española. Algunas de estas obras serían adquirida en la subasta parisina por los duques de Galliera, dos de las cuales tuvieron una gran resonancia: la Magdalena de Canova y el San Francisco, atribuido a Murillo, por 15400 francos, actualmente expuestos en la Galleria di Palazzo Rosso de Génova<sup>2344</sup>. La doble venta de la colección de Salamanca puede ser otro ejemplo claro de la pérdida de cuadros y esculturas en este momento. Don José de Salamanca Mayol (1811-1883), un insigne banquero que la Reina lo ennoblecía con el título de Marqués de Salamanca, por su contribución al desarrollo tecnológico y económico del país, especialmente en los proyectos de creación del primer ferrocarril Madrid-Aranjuez, inaugurado en 1851, o la fusión del Banco de Isabel II con el de San Fernando (31-X-1845). En su persona podemos ver identificado el nuevo burgués enriquecido surgido de los amplios negocios desarrollados en el ámbito de la irrupción del capitalismo en la etapa isabelina, que después de amasar una amplia fortuna, se dedicó a coleccionar cuadros y esculturas, más como exaltación de su propia posición social, emulando el papel que hasta este momento había desempeñado la alta nobleza española, que como un interés puramente cultural. Con el objetivo de adquirir cuadros de amplio valor artístico fue asesorado por los Madrazo y por Gregorio Cruzada Villaamil, pintores de la corte isabelina, consagrados por la crítica del momento. A la muerte de Madrazo, Salamanca adquiriría tres años

<sup>2343</sup> Aparece publicado en el artículo “Venta de la colección de cuadros del difunto Sr. Pelegrín” en *El Arte de España*, 1868, pp.22-23.

<sup>2344</sup> VAZQUEZ ASTORGA, Mónica *La pintura española en los museos y colecciones de Génova y Liguria (Italia)*. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, pp.31-33.



después, cuarenta y una de sus mejores pinturas<sup>2345</sup>, al que se unieron unas sesenta de la Colección de Altamira, treinta y nueve de la Colección Iriarte, nueva de la antigua Colección Mengs, más otras de las ricas colecciones del Infante Don Luis de Borbón, de los Marqueses de Almenara y de Leganés, de los Condes de Chinchón, Oñate y San Luis, la colección López Cepero y un largo etcétera. Su brillante carrera económica vivió amplias oscilaciones, que se proyectó en su situación como coleccionista de arte, ya que el 10 de enero de 1850, en una primera crisis económica, intentó vender parte de sus obras para paliar su situación de bancarrota, siendo impedido por la propia Reina que se negaba a autorizar la venta de esta galería al extranjero, por lo que adquirió varias de sus obras que serían incorporadas al Patrimonio de la Corona. Sin embargo, con la crisis de 1865-1866, no tuvo más remedio que poner en subasta un gran número de sus bienes artísticos, celebrándose una primera en París entre los días 3 y 6 de junio de 1867, vendiendo un total de 233, con una tasación de 1.500.000 francos, produciendo la subasta una verdadera expectación no sólo por la belleza de las piezas, sino porque algunas se afirmaban que procedían del Palacio Real de Madrid<sup>2346</sup>. Una segunda venta se celebraría unos años más tarde, el 25 de enero de 1875, con ciento dieciocho cuadros, cuarenta y cuatro de ellos españoles. Otro lote de pinturas perteneciente al Marqués de Salamanca sería adquirido por la propia Isabel II, quizás por impedir que una de las más prestigiosas colecciones del siglo XVIII saliera del país, aunque cabe añadir que entre los días 24 y 26 de octubre de 1849 fueron devueltos a Salamanca once cuadros de su antigua colección. Con ello desaparecía una de las colecciones privadas más importantes de la pintura española contemporánea, sin que la intervención estatal pudiera hacer nada por evitarlo, a lo que habría que añadir que no fue el único caso en el mercado español.

La colección de de Sir Stirling Maxwell constituiría según Hilary Macatney en la más grande formada en Gran Bretaña de arte español, de las que se encontraba más de 130 pinturas al óleo. Desde 1848 comenzaría a formar su colección, adquiriendo obras de marchantes en España y Francia, además de Gran Bretaña. Viajaría a la ciudad de Sevilla en 1845, quien al conocer al literato Bartolomé José Gallardo, adquirió el primero de los ejemplares de los Caprichos de Goya, hoy en la universidad de Glasgow, y posteriormente gracias al escritor Valentín Cardera, pudo conseguir los aguafuertes de Goya y los Desastres de la Guerra, actualmente en el Museo de Bellas Artes de Boston. En un gran número de subastas celebradas en Londres y París a finales de los años 1840 y principios de 1850, Stirling adquiriría en el

---

<sup>2345</sup> La colección del pintor de Cámara José de Madrazo, fue considerada por Madoz en 1847 como una de las más importantes del Madrid Isabelino. ALAMINOS, Eduardo y SALAS VAZQUEZ, Eduardo José de Madrazo, coleccionista en *José de Madrazo (1781-1859)*, Catálogo de la Exposición. Madrid, Museo Municipal, 1988, pp.153-177.

<sup>2346</sup> DOMINGUEZ-FUENTES, D. "Las dos subastas parisienses de la galería Salamanca (1867-1875)", *Goya*, 295-296, julio-octubre, 2003, pp.305-310.

mercado más de la mitad de su colección. Así con motivo de la venta en Londres de la colección del fallecido Sir John Macpherson Brackenbury, cónsul británico en Cádiz desde la década de 1820, adquirió algunas obras maestras de Juan del Castillo, Murillo y Goya, al que se unirían las subastadas en 1851 en Londres, que habían pertenecidos al fallecido General John Meade, cónsul británico en Madrid. El propio Stirling participó también participaría en la subasta que se celebró en Londres, que se celebraría en mayo de 1853, de las dos colecciones de arte español más importante fuera de España: la de la Galería española de Luís Felipe y la de la colección legada al mismo rey por el inglés Frank Hall Standish, escritor y viajero que pasó en España sus últimos años, cuya colección de cuadros fue muy importante, entre los que se encontraban once zurbaranes, cuatro Velázquez y algunos Murillos<sup>2347</sup>. Entre las obras pertenecientes a la Galería Española se encontraría famosa Dama de Armiño de El Greco. Posteriormente, en 1852 participaría en la subasta acaecida en París de las obras artísticas que habían pertenecido al Merechal-General Soult, entre la que se encontraba la famosa Santa Catalina de Murillo, entonces atribuida a Zurbarán<sup>2348</sup>.

De esta manera las pinturas y esculturas se comenzaban a considerar no solamente como bienes de interés histórico-artístico, ni siquiera como bienes de prestigio social como parte de la identidad patrimonial de una clase social determinada, en este momento la burguesía isabelina, sino que su adquisición comenzaba a ser considerada como un bien económico, insertado en un mercado de valores, por lo que no podemos asombrarnos de que se surgiera un verdadero desplazamiento de piezas de primera categoría a los coleccionistas foráneos, con ansia de enriquecerse con las amplias ganancias económicas que empezaban a producirse en estos años<sup>2349</sup>. Sin embargo, no existió una verdadera regulación del mercado artístico, sino que simplemente seguían en vigor las prohibiciones de exportaciones que se habían promulgado desde la etapa de Fernando VII, y que posteriormente la Reina Regente había vuelto a poner en vigencia, pero que en cierta manera no cumplían las expectativas de un mercado contemporáneo que se iba abriendo camino en Francia. No cabe duda que la pérdida del patrimonio monumental fue un hecho, ya que un gran número de bienes históricos-artísticos terminaron en las colecciones extranjeras, aunque todo hay que decirlo no solamente por la desidia de la administración española, que sin duda la hubo, sino también por las circunstancias sociales y políticas que estaba atravesando nuestro país. La

<sup>2347</sup> GARCIA FELGUERA, María de los Santos, *La fortuna de Murillo (1682-1900)*, Sevilla, 1989, pp.65-69.

<sup>2348</sup> MACARTNEY, Hilary La colección de arte español formada por Sir William Stirling Maxwell, en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M<sup>a</sup> DOLORES, *Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en la España de los siglos XVIII y XIX*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp.236-264.

<sup>2349</sup> GUTIERREZ BURÓN, Jesús “El cambio de clientes en el siglo XIX: el arte como mercado. Consecuencias”, en *Actas del VII Congreso del C.E.H.A.*, Mesa I, Murcia, 1988.

arruinada nobleza de sangre e incluso en muchos momentos las ruinas económicas de la burguesía emprendedora en épocas de crisis, a lo que hay que unir las medidas desamortizadoras y las guerras carlistas pondría en muchas ocasiones a la venta sus propias colecciones pictóricas, que bien se podía adquirir en venta directa, o lo que era más frecuente en las amplias subastas que se celebraban en el extranjero, que produjo la dispersión de un gran número de colecciones pictóricas<sup>2350</sup>.

**2.2.2.Las disposiciones legales sobre tráfico de obras de arte en la España isabelina: Las Reales ordenes de 24 de mayo de 1849, 6 de mayo de 1851, 14 de agosto de 1856 y 6 de junio de 1865.**

Curiosamente se estableció una disposición prohibitiva sobre las importaciones de obras artísticas como se puede comprobar con la promulgación de **la Real Orden de 24 de mayo de 1849** disponiendo que por el Ministerio de Hacienda se comuniquen las ordenes convenientes para que por las Aduanas del Reino se impida la introducción de objetos de arte, procedentes de los Museos de Roma, Florencia y Venecia. En la disposición se precisaba como el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, dirigió al de Hacienda una comunicación en la que se notificaba que en Austria se había establecido prohibir en *todo su monarquía* el comercio de objetos de arte procedentes de los Museos de Roma, Florencia y Venecia. Al mismo tiempo se especificaba el objetivo de esta resolución: *es de conservación y civilización, e impedir que tantos recuerdos gloriosos como se encierran en Italia y que después de tantos siglos son la admiración del mundo entero, sean la presa de las facciones tiránicas que en este momento esclavizan la desgraciada Península y amenazan abandonar aquellos objetos a especuladores extranjeros. Pero mal podrían conseguirse los deseos del Gobierno Imperial, si todas las Potencias amigas o aliadas no concurren a asociarse a esta obra de humanidad, dictando en sus respectivos Estados medidas análogas.* Con este motivo se dispondría que *por el Ministerio de su digno cargo se comuniquen las órdenes convenientes para que por las Aduanas del reino se impida la introducción de los objetos indicados.*

Una **Real Orden del 6 de marzo de 1851** determinaría los derechos de aduanas que habían de pagar las pinturas en cobre, lienzos, maderas o piedras, fueran de autores vivos o de autores muertos, por lo que se incluían por primera vez un referente que iba más allá de lo puramente temporal, ya que se incluían a pintores contemporáneos en el arancel. Al mismo tiempo se establecía la total libertad de importación de pinturas a cambio del pago de un arancel, *40 reales por unidad, cualquiera que sea la bandera del buque conductor, y bien vengan por mar o por tierra.* Otra **Real Orden del 14 de agosto de 1856** declaraba libres de derechos las obras de bellas artes ejecutadas por españoles en el extranjero, acreditando previamente la circunstancia de ser trabajo de dichos artistas, fundamentado en dos hechos el ser *estatuas ejecutadas por*

---

<sup>2350</sup> DOMIGUEZ-FUENTES, Sophie, “Las dos subastas parisienses de la Galería Salamanca (1867 y 1875)” *Goya*, Revista de Arte, Núm. 295-296, Madrid, 2003, pp.305-310.

*artistas españoles pensionados para el estudio de la escultura en el extranjero, que se destinan al Museo nacional de pinturas; y considerando que dichas obras pueden reputarse sino como nacionales, atendidas las condiciones y circunstancias que concurren en los autores, y que conviene facilitar la adquisición de estos trabajos, toda vez que contribuirán a engrandecer las bellas artes, por lo que en lo sucesivo las obras de arte ejecutadas por españoles en el extranjero, pensionados o comisionados por el Gobierno, Academias de Bellas Artes y otras corporaciones o personas, se consideren como objetos nacionales, y por consecuencia libre de derechos; debiéndose acreditar las circunstancias de ser trabajo de dichos artistas.* En la **Real orden de 16 de mayo de 1861** se incluiría la instrucción que debían de ser cumplida para presentar productos en la exposición internacional que ha de celebrarse en Londres el año próximo de 1862, por el que se podría ser transportados al edificio de la Exposición, sin que sean previamente registrados y sin pagar ningún derecho, pero todos los géneros que no fueren reexportados al terminarse la exposición, satisfarán los derechos marcados por la legislación de Aduana, entre los que se encontrarían las obras de arte. Cabe citar finalmente la **Real orden de 25 de febrero de 1863** concediendo franquicias a las obras de Bellas Artes ejecutadas por españoles en el extranjero.

**2.2.3. La adquisición de obras de arte por el Estado. Real orden del 10 de febrero de 1864 estableciendo las reglas y trámites que han de seguirse para la adquisición por el Estado de obras científicas, literarias y artísticas.**

Como colofón debemos de resaltar la promulgación de la **Real orden del 10 de febrero de 1864** estableciendo las reglas y trámites que han de seguirse para la adquisición por el Estado de obras científicas, literarias y artísticas, con destino al Museo Nacional, por lo que se consignaría anualmente fondos en el presupuesto de este Ministerio, importando dictar reglas para que dichos recursos se inviertan del modo más conveniente al servicio público. La Dirección del Museo Nacional de Pinturas y Esculturas propondría al Ministerio de Instrucción Pública las obras artísticas que considerase dignas de ser adquiridas, resolviendo el Gobierno, oyendo a la Real Academia de San Fernando (art.4). Tanto la propuesta de la Dirección del Museo como el informe de la Academia se publicarían en la Gaceta de Madrid, una vez acordado la adquisición de alguna obra de arte con el expresado destino (art.4).

**2.3. Una frustrada regulación de la tutela pública de las excavaciones arqueológicas: La impronta del derecho de la propiedad privada en el ámbito del sistema normativo del Patrimonio Arqueológico.**

**2.3.1. Un ensayo frustrado del modelo institucional del Patrimonio Arqueológico.**

La configuración de la institucionalización administrativa arqueológica estaría fundamentada en la política de centralización que había puesto en marcha el partido moderado en todos los sectores normativos. La Real

Academia de la Historia seguiría teniendo el papel de inspección de antigüedades que se le había concedido desde la etapa borbónica, reforzada su posición por **el Real decreto de 1º de mayo de 1850** por el que se reformaría sus Estatutos, con la incorporación de los Correspondientes, a los que se uniría las Comisiones Provinciales de Monumentos, los inspectores de antigüedades y las Corporaciones Municipales, cuyas atribuciones estarían limitadas por el derecho absoluto de la propiedad privada.

**2.3.1.1. El papel trascendental de la Real Academia de la Historia como Inspector de antigüedades. El Real decreto de 1º de mayo de 1850 por el que se reforman los Estatutos: Los Correspondientes de la Real Academia de la Historia.**

Con la llegada del Partido Moderado, La Real Academia de la Historia seguirá teniendo un papel predominante en el ámbito de la inspección y conservación de bienes de interés histórico y arqueológico. Sin embargo, con la llegada al poder del partido moderado, la Real Academia de la Historia no participaría en la puesta en funcionamiento de las Comisiones de Monumentos promulgadas por Real Orden de 13 de junio de 1844, que incluso se vio en peligro sus atribuciones de inspección de antigüedades, por lo que incluso mandaría una exposición a la Reina, exponiendo y recordando las atribuciones que tradicionalmente había gozado desde la etapa borbónica sobre la tutela de los bienes arqueológicos: *No podría por lo tanto parecer justo a la bondad de V.M. y de su ilustrado Gobierno, que sin culpa alguna ni demérito por su parte quedase privada la Academia de las atribuciones que por las leyes tiene, y hasta del placer y concurrir a la grande obra de salvar los objetos preciosos de los ramos de su instituto en el Reyno (...) Pero la Academia, Señora, cree que no puede ser olvidada y menos postergada tratándose de estas materias (...) no duda en expresar con fiadamente que se dignará conservar le la inspección que le está concedida sobre todos los ramos de su instituto, disponiendo que se le pasen los trabajos y proyectos de las corporaciones creadas y de las autoridades de las provincias para dar sobre todo el informe conveniente al Gobierno con arreglo a lo dispuesto en las leyes y órdenes vigentes (...).* Por consiguiente, la Real Academia solicitaba que las atribuciones otorgada a la Comisión Central fueran transferidas a su Comisión de Antigüedades, que sería denegada por Real Orden de 16 de agosto de 1844, alegando que para impedir la pérdida total de tantas preciosidades (...) *ha tenido que desarrollarse la acción administrativa del Gobierno buscando medios y agentes que no eran antes necesarios; pero no bastaba ya la ciencia que medita y ordena, sino las manos que obedecen y ejecutan, al mismo tiempo que se puntualizaba que en nada menoscaba, pues, por la Real Orden de 13 de junio las atribuciones de la Academia: lícito le será siempre ejercer sobre las antigüedades de España aquella ilustrada inspección tan propia de sus luces; oportuno también y conveniente que eleve al Gobierno cuantas observaciones le sugiera su celo acerca de tan interesante punto; el mismo Gobierno se propone consultarla siempre que de resultados de los datos y noticias recogidas por las comisiones necesite adoptar alguna medida importante; y esa ilustre corporación, conservando así el carácter elevado y científico que le*



*corresponde sin descender a pormenores de ejecución que no son propio de su naturaleza y que acabarían por serle ingratos, cumplirá con lo que la nación espera de ellas, y sostendrá el alto nombre que ha sabido granjearse* (Oficio de Pedro José Pidal al Director de la Real Academia de la Historia, Madrid, 16 de agosto de 1844)<sup>2351</sup>.

Ante las dificultades que habían surgido en este periodo inicial de la etapa isabelina, la Real Academia adopta un modelo de reformas internas, primero con la promulgación del **Real Decreto de 25 de febrero de 1847**, referente al número de académico de que debía de constar, estableciéndose treinta y seis individuos, quedando suprimida las categorías de numerarios y supernumerarios, y posteriormente con la reforma de sus propios Estatutos, que serían aprobados por **Real Decreto de 1º de mayo de 1850**, que en su artículo 31 dispondría que aplicaría como creyera conveniente sus haberes a las investigaciones, adquisiciones y conservación de libros manuscritos y demás monumentos históricos cuya inspección le está confiada por las leyes; a promover viajes literarios para el reconocimiento de archivos, bibliotecas y sitios célebres por sus antigüedades. La reforma del Reglamento que fue aprobado en las Juntas de 21, 22 y 25 de junio del mismo año, por lo que supuso una reorganización en las actuaciones de la Academia, establecidas por medio de secciones: una de antigüedades, geografía, cronología y paleografía; otra de historia política, civil, eclesiástica y militar; otra historia de las ciencias, letras y artes y otra de estudios históricos orientales con relación a España. En el artículo 3º del nuevo Reglamento se subrayaba su papel en la tutela pública de los bienes de interés histórico y arqueológico: *La Academia considera asimismo como un deber y obligación importante el contribuir a la conservación y examen de los monumentos históricos del Reino, cuya inspección le está encomendada por las leyes*. Para ello reactivará la red de correspondientes, a los que le remite una carta circular, junto con los nuevos estatutos en 1851, y una segunda, en 1853. En el artículo 9º del Reglamento quedaba especificada las funciones de los Correspondientes, quienes contribuirían a los objetos del instituto comunicando a la Academia noticias útiles y cumpliendo los encargos que le dieran, al mismo tiempo debían remitir cada dos años alguna memoria, disertación, documentos, objetos de antigüedad, apuntes o noticias sobre cualquiera ramo del instituto. A su vez todos los académicos de número al igual que los correspondientes debían participar sin pérdida de tiempo a la Academia, los hallazgos o descubrimientos de monumentos u objetos útiles para cualquiera de los ramos de la historia, *acompañando la explicación, memoria o razón que pudiera* (art.10). Maier subraya como el progresivo control de la Inspección de las Antigüedades de la Real Academia de la Historia era proporcional al mal funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Monumentos, que van a ser reformadas por

<sup>2351</sup> MAIER, Jorge *La Real Academia de la Historia y la arqueología española en el siglo XIX*, Eres Arqueología/Bioantropología, Santa Cruz de Tenerife, 12, febrero 2004, pp.102-103.



Real Decreto de 15 de noviembre de 1854, a comienzo del Bienio Progresista<sup>2352</sup>. Por el Real decreto de 28 de mayo de 1856 (Gaceta de Madrid, núm.1246, 02/06/1856, p.1), sería nuevamente reformado los Estatutos de la Academia, aunque en esta ocasión no aparecería una especial referencia sobre su labor en la inspección de antigüedades.

El respaldo definitivo institucional en la tutela pública del Patrimonio Arqueológico vendría con la publicación de la Real Orden de 6 de junio de 1865 excitando el celo de los Gobernadores y las Comisiones de Monumentos de las provincias para que se cumpla la ley 3<sup>o</sup>, tít.20, libro 8<sup>o</sup> de la Novísima Recopilación acerca de las antigüedades que se descubran en todo el reino (Gaceta de Madrid, núm.169, 18/06/1865, p.1), probablemente por el hecho de que no estaba siendo aplicada. Alegre Ávila señala como *el incumplimiento de la ley (la Novísima Recopilación) debió de ser ciertamente reiterado, como lo prueba que bastantes años después de la promulgación de las disposiciones en aquella recogidas se recordarse que el olvido de la misma había ocasionado la salida de España o la destrucción de objetos preciosos y de suma importancia para el esclarecimiento de la historia patria, situación que dio lugar a que de nuevo se excitase el celo de los gobernadores y de las Comisiones de Monumentos para atender al exacto cumplimiento de las normas en las mismas contenidas.* Sin duda alguna la promulgación de esta disposición significaría el respaldo definitivo por parte del Gobierno a la potestad que había asumido la Real Academia de la Historia en la tutela de los bienes arqueológicos, al igual que había sucedido con la Real Academia de Bellas Artes en el ámbito de los bienes artísticos a raíz de la reforma del Reglamento de las Comisiones de Monumentos publicada en el mismo año.

#### **2.3.1.2. Las atribuciones de las Comisiones Provinciales en materia arqueológica y su impronta en el derecho de la propiedad privada.**

Pablo Ortiz Romero resalta la impronta que tuvieron las Comisiones Provinciales en materia arqueológica: *El desajuste más importante en el conocimiento de las Comisiones de Monumentos viene dado por la ausencia de la reflexión globalizadora y sistemática (....) La escasez de fuentes en algunos casos, el difícil acceso a otras, y las verdades aceptadas sin el tamiz del análisis crítico han ido consolidando ideas erróneas, como es defender que las Comisiones de Monumentos tienen en sus orígenes una relación distante con la Arqueología. En esto se insiste especialmente a la hora de abordar el origen y los primeros años de estas instituciones, que se vinculan automáticamente al proceso desamortizador de Mendizabal, y, por tanto, a la gestión del patrimonio arqueológico (...) Lo más común es que se establezca una relación causa-efecto entre la desamortización y el nacimiento de las Comisiones de los Monumentos, sin entrar en mayores consideraciones. Estas instituciones habrían surgidos como una reacción del Estado ante el expolio que se cebaba con los bienes eclesiásticos enajenados. Esta tesis, sin lugar a dudas la más extendida, rara vez se ocupa de los antecedentes de esta*

---

<sup>2352</sup> MAIER, Jorge, 2004, pp.103-104.

*institucionalización, al menos no en la línea de considerarla como un proceso que se remonta a los tiempos de la Ilustración y que acaba concretándose con la consolidación del Estado Liberal. Se piensa en las Comisiones de Monumentos como herramientas concebidas para entibar el desmoronamiento estrepitoso del patrimonio de la Iglesia. En otras ocasiones se ve en las Comisiones un instrumento al servicio del inventario monumental del país (...). En nuestra opinión las Comisiones de Monumentos nacen como parte de una estrategia del Estado para ir conformando el Estado-Nación, un horizonte en el que habrían de ser especialmente útiles por sus competencias sobre las antigüedades. Su intervención en el expolio que sigue a la desamortización de Mendizábal es solo uno de los variados cometidos que el Estado pensó para ellas, aunque no fue el principal. Las Comisiones de Monumentos nacieron con una innegable vocación arqueológica y la Arqueología fue desde el mismo momento fundacional uno de sus principales quehaceres. La crisis endémica que va a caracterizar su larga vida tendrá su origen en la actitud que ante ellas adopta al Estado (...)*<sup>2353</sup>.

Una de las cuestiones primordiales de toda excavación era la financiación que contaba para realizarla, cuyo importe designado era remitido a las Comisiones Provinciales, aunque en algunas ocasiones era producto de desvíos de otras partidas presupuestarias, como podemos apreciar en el contenido de la Real Orden del 27 de abril de 1852, en la que se mandaba que las cantidades consignadas en los presupuestos provinciales para las atenciones de las Comisiones Provinciales se aplicase exclusivamente a la conservación de edificios celebres, y no en la búsqueda de mosaicos y antigüedades. En el Reglamento de 1865, se reforzaba las atribuciones arqueológicas de las Comisiones de Monumentos, al hacer las propuestas que debían de hacer sobre excavaciones arqueológicas, dirigidas tanto al Gobernador como a la Academia de la Historia. La propiedad del objeto descubierto va a volver a ser objeto de discrepancia entre los intereses particulares y el supuesto interés nacional. En el artículo 23.2 se establecía expresamente que los objetos descubiertos serían puestos en poder de la Comisión, es decir, bajo tutela estatal, por lo que de esta manera como apuntan Ana Yáñez y Ana Carmen Lavín *se empieza a modificar levemente el concepto de propiedad y se va formando una conciencia sobre el carácter social de los bienes del Patrimonio Histórico. A lo que se une el artículo 23.3 en la que señala que recogerán por cuantos medios les sean posibles las lápidas, vasos, vasijas, monedas y otros objetos de antigüedad (...), al mismo tiempo que se estimulaba a la fundación de museos donde depositar los bienes arqueológicos descubiertos.*

### **2.3.1.3. Los inspectores de Antigüedades.**

A pesar de la configuración de las Comisiones de Monumentos, se nombraron a unos individuos con el título de Inspectores de Antigüedades, que

<sup>2353</sup> ORTIZ ROMERO, Pablo *Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos de Badajoz. Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971)*, Mérida, Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Extremadura, 2007, pp.23-25.

tenía como objetivo primordial la custodia y conservación de las antigüedades. El cargo nacería en el periodo de María Cristina en opinión de cómo necesidad de la propia Academia de activar y legitimar la inspección de antigüedades y buscar el medio para que observaran el cumplimiento las propias autoridades locales, que en consecuencia se convertirían en interlocutores entre las nuevas autoridades provinciales y municipales y la Real Academia de la Historia, siguiendo el perfil que en cierta manera había tenido su origen en la administración francesa, ya que el 23 de octubre de 1830 se había creado el cargo de *Inspector General des monuments*, a propuesta del Ministro del Interior Guizot. Se puede apreciar tres fases en la evolución del cargo: 1º) Desde 1838, fecha de aparición de la figura administrativa, hasta la creación de la Comisión de Monumentos (1844), que se nombraron tres inspectores, uno de ellos en Andalucía y otros dos en las Islas Baleares; 2º) Se extiende desde la creación de las Comisiones Provinciales hasta la reforma de su Reglamento en 1865, en que se nombran cuatro inspectores y una tercera, que llegaría hasta 1876, donde se nombran tres inspectores, desapareciendo en este último el cargo definitivamente. Los inspectores de las dos primeras etapas se nombraban a instancia de la Real Academia de la Historia, mientras que la última sería el Gobierno el que designaría el cargo, aunque con carácter honorífico. El cargo no se nombraba para toda España sino solamente para algunos puntos de la Península, según las necesidades pertinentes. Entre los primeros inspectores nombrados cabe destacar a Manuel de la Corte Ruano (1816-1852), en virtud de la Real Orden del 9 de octubre de 1838, que fue el encargado de proteger las antigüedades de Andalucía; Joaquín María Bover de Roselló, como Inspector de Antigüedades de Mallorca desde 1840; Buenaventura Hernández de Sanahuja, que a raíz de la orden de 15 de diciembre de 1851, sería nombrado para Cataluña y Baleares. Posteriormente, serían nombrados a Manuel de Góngora (1812-1884) como Inspector de Antigüedades de Granada y Jaén por Real Orden de 29 de abril de 1859 y Luis Maraver y Alfaro (1814-1886), que aunque se desconoce la fecha de nombramiento, tuvo que producirse antes de 1864. Todos serían nombrados a propuesta de la Real Academia de la Historia y todos eran correspondientes del Cuerpo Literario y miembros de la Comisión de Monumentos<sup>2354</sup>.

Es muy interesante observar el procedimiento administrativo del nombramiento de los inspectores, donde la Academia de la Historia presentaba al Ministerio de Gobernación al candidato que consideraban más idóneo: *El 6 de septiembre de 1838 hallándose en Madrid el Señor Ruano, presentó al Excmo. Señor Presidente de la Academia un escrito, en que lamentándose del estado de abandono en que estaban los restos de antigüedades tan copiosos en Andalucía, y recordando la incumbencia que dan las leyes a la Academia sobre todas las*

---

<sup>2354</sup> MAIER ALLENDE, Jorge; SALAS ALVAREZ, Jesús Los inspectores de antigüedades de la Real Academia de la Historia de Andalucía en *Las Instituciones en el origen y desarrollo en la arqueología en España*. Universidad de Sevilla, 2007, pp.176-180.

*antigüedades del Reino, en el caso de no haber otra persona que hubiese designado la Academia para estar a la mira e inspeccionar los descubrimientos que se hiciesen, se ofrecía generosamente a desempeñar este encargo. Pedía también que se le autorizase por el Gobierno para que se le franqueasen los Museos, Archivos y depósitos de las provincias y pueblos de Andalucía sin ser inquietados por las Autoridades locales. El Excmo. Sr. Director hizo presente a la Academia la utilidad y ventaja de la Academia en tener un sujeto tan celoso, como daba a entender el Señor Ruano, y como los había tenido la Academia en otras partes. Pero puso pues, y la Academia acordó, que se hiciese al Gobierno un exposición para los fines indicados por el pretendiente, y en efecto accedió al Gobierno un exposición para los fines indicados por el pretendiente, y en efecto accedió el Gobierno a la solicitud de la Academia comunicándola por el Ministerio de la Gobernación de la Península con fecha de 9 de octubre de 1838 la Real Orden<sup>2355</sup>. Posteriormente, sería informada del acuerdo la Real Academia de la Historia: La Academia de la Historia, encargada por nuestras leyes de la Inspección de las antigüedades del Reino, ha confiado la de las existentes y que en adelante se descubran en Andalucía, a D. Manuel de la Corte y Ruano, vecino de Cabra y Académico correspondiente. S.M. la Reina gobernadora que se interesa vivamente por la conservación de los objetos y monumentos que puedan ser de utilidad para las letras o las ciencias, se ha servido resolver se prevenga a V.S. como de su Real Orden lo ejecuto que proteja al expresado Ruano en el desempeño de su encargo, removiendo cualquier obstáculo que se le oponga ya en el examen e inspección material de las antigüedades, ya en la saca de dibujos, copia de inscripciones y demás que considere oportuno y conveniente<sup>2356</sup>.*

El informe que emitiría poco tiempo después sobre el estado de conservación de las antigüedades es un claro referente del desamparo en que se encontraba el ámbito andaluz, y los obstáculos que encontraba en el desempeño de su cargo. No se tiene claro cuáles son las funciones específicas de estos Inspectores de Antigüedades, ya que nunca se formó un reglamento o instrucción sobre sus deberes, funciones u obligaciones. Como apunta Jorge Maier, por las instrucciones que se dieron a algunos inspectores, como el caso de Hernández de Sanahuja, se podría deducir cuáles eran sus cometidos: 1º) Se le encarga que incite a las autoridades provinciales y municipales a tomar medidas en la conservación de lo descubierto y de lo que se descubriese; 2º) Que recibiese, como representante de la Academia, las noticias de las autoridades, personas particulares y correspondientes de la Academia, los cuales debían de auxiliarles en sus trabajos; 3º) Si tuviesen noticias de un descubrimiento debía de pasar a reconocerlo y, de acuerdo con las autoridades provinciales y municipales, tomar las medidas preventivas necesarias para su conservación hasta que se tomasen las medidas convenientes por el Estado para su conservación y 4º) Se le encarga la visita a los museos arqueológicos, a los lugares donde se conservan monumentos, de los que tenía que configurar un índice, así como visitar colecciones<sup>2357</sup>. Estas directrices estaban

<sup>2355</sup> MAIER; SALAS, 2007, pp.190.

<sup>2356</sup> MAIER; SALAS, 2007, pp.182-183.

<sup>2357</sup> MAIER; SALAS, 2007, p.184.

fundamentadas en las leyes vigentes, y especialmente en la Real Cédula de 1803 o ley 3ª del libro 8º, título 20 de la Novísima Recopilación. Hernández de Sanajuana sería el tercer inspector de antigüedades nombrado, dándoles unas medidas más precisas que los dos nombrados anteriormente, teniendo su fundamento legal en la Real Cédula de 1803 o ley 3ª del libro 8º, título 20 de la Novísima Recopilación. Se le encargaba que se incitase a las autoridades provinciales y municipales a tomar medidas en la conservación de lo descubierto y de lo que se descubriese. Al mismo tiempo, tenía que recoger las noticias de las autoridades, personas particulares y correspondientes de la Academia, teniendo que reconocer todos los descubrimientos que se hiciesen e incluso, con las autoridades municipales y provinciales, tomar las medidas oportunas para su correcta conservación hasta que tomase la medida definitiva las autoridades centrales administrativas. Se le encargaría de visitar los museos arqueológicos, de los que debía de elaborar un catálogo o inventario e incluso las colecciones privadas y monetarios particulares. En algunos informes redactados por la Real Academia de la Historia se precisa cuáles serían las atribuciones de los inspectores de las antigüedades. En el Informe de la Comisión de la Real Academia de la Historia de 1854 sobre las antigüedades descubiertos en las obras de puerto de Tarragona se precisaría cuáles eran las atribuciones que tendría que tener los inspectores de las antigüedades. Se vuelve a reivindicar a los preceptos recogidos en la Novísima Recopilación: *Las instrucciones que deben darse al inspector, deben basarse en la que está consignada en la ley 3ª libro 8º, tít. 2º de la novísima recopilación, sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos que se descubran en el reino, bajo la inspección de la Real Academia de la Historia, pues aunque este delegado no sea competente para tomar por sí determinación alguna, debe como encargado por la Academia recibir las noticias que se les comuniquen, pasar a reconocer los objetos descubiertos, y de acuerdo con las autoridades de las provincias, tomar preventivamente las medidas que crea oportunas para la conservación de los mismos, mientras que el Gobierno de S.M., en vista de que la Academia le informe adopta las convenientes medidas para su conservación y destino.* Sin embargo nuevamente el respeto al derecho de la propiedad privada se convierte en una barrera infranqueable en la actuación administrativa de los inspectores de antigüedades, como aparece reflejada en las Instrucciones que se dieron al Inspector de Antigüedades de Cataluña y Valencia el 29 de mayo de 1854 subrayándose que en el ejercicio de su actuación procurará *contar con la benevolencia de sus dueños, reconocer y examinar los museos particulares, y gabinetes numismáticos, que haya en los distritos de su inspección y dará noticia a la Academia de lo más interesante que se encuentre en ellos; y previa la debida anuencia, procurará sacar copia de alguna moneda o medalla, que acaso se encuentre de las acuñadas en España, que no se haya publicado hasta ahora (...).*

#### **2.3.1.4. El deber de las Corporaciones Municipales de conservar las antigüedades descubiertas en sus localidades.**



La administración municipal en el periodo isabelino viviría una importante reforma, al ser reforzado el papel de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales en el ámbito local. Las Corporaciones Municipales, especialmente el alcalde, habían tenido un papel predominante desde la legislación borbónica en el cuidado de las antigüedades, tanto en dominio público como privado, que se descubriesen. Sin embargo, la verdadera realidad fue otra, ya que la falta de por parte de un amplio número de Corporaciones Municipales fue un hecho fehaciente, como refleja el **Oficio del propio Manuel de la Corte y Ruano**, en que se da cuenta de la nula cooperación de las autoridades de los pueblos de Andalucía en la inspección de antigüedades, *por el estado de los pueblos y tibieza de las autoridades locales*, por el que se queja de que para paliar esta carencia, la Real Academia carecía *de muchos de los recursos pecuniarios, con que antes contaba, y hallándose sobrecargada de complicados asuntos*. Se lamenta como una vez nombrado inspector de Andalucía, apenas circulada la susodicha Real Orden a todos los pueblos de las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Jaén, *por los respectivos Sres. Jefes Políticos, y prevenidos los Ayuntamientos de la necesidad de obedecerla, se propuso la Comisión dar cuenta a la Academia, en partes mensuales, de todos los descubrimientos hechos en el distrito de las siete provincias de Andalucía, insertando las comunicaciones y descripciones, que las autoridades locales remitiesen. Pero muy luego se vió obligado a cambio rumbo, observando que éstas, dedicadas al desempeño de sus funciones administrativas y gubernativas, no salían del círculo de sus medidas de gobierno, política, administración, recaudación; entendiendo acaso, que dicha Suprema resolución debía tener lugar cuando el encargado de personarse en los pueblos, que a cada una le estaban confiados, y no, cuando se le exhortase de oficio (...)* La Comisión de mi cargo ha ensayado todos los medios que le parecieran oportunos para el logro de sus fines: ni desembolsos propios, ni exhortaciones, ni ruegos, ni solicitudes extrajudiciales, ni persuasiones de utilidad pública, ni espíritu de gloria nacional, ni otros resortes, que debieran estimular a los funcionarios al logro de las filantrópicas miras del Cuerpo que represento (...) Y no se contenta las Autoridades Superiores e Inferiores con guardar un extraño silencio a la voz de gloria y de recuerdos patrios, sino que a veces son los primeros en decretar las de las antigüedades, fortalezas, muros, columnas, obeliscos, templos, villares y despoblados (...). Ante esta situación, Ruano propondría la publicación de una instrucción razonada, en que el Gobierno explique a los pueblos que clase de obligaciones son las que se le impusieron por la Real Orden del 9 de octubre de 1838, acuyo fin tengo el honor de pasar a manos de V.S. el adjunto pliego de bases, para que la Academia se sirva tomarlo en consideración y tenerlo presente, cuando crea oportuno formar el trabajo e instrucción susodicha y la eleve a la aprobación del Supremo Gobierno; cuidando se circule en los boletines oficiales de las provincias de Andalucía por los Jefes Políticos respectivos. De esta manera el 14 de octubre de 1842 presentaría un informe en el que establecía las bases principales en que pudieran fundarse la instrucción que dirija el Supremo Gobierno a las provincias de Andalucía, por conducto de los Señores Jefes Políticos, mandando se circule y haga entender a todos sus pueblos por medio



de los Boletines Oficiales. Dejaba claro el papel que le correspondía a la Real Academia de la Historia en el ámbito de la inspección de las antigüedades, en virtud de la Ley 3º título 20, Libro 8º de la Novísima Recopilación, la Real Academia de la Historia, al mismo tiempo que *las Autoridades de las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Huelva y Cádiz, tanto superiores como inferiores, y los Ayuntamientos de cada pueblo en particular, deben cumplir y exhortar a que se cumplan en todas las partes, los artículos de la Instrucción insertos en dicha Ley, especialmente el segundo, que previene a los magistrados y justicias de cada distrito recojan y pongan en custodia los monumentos descubiertos en ellos, que los poseedores y dueños de los mismos den parte y noticia circunstanciada de todo a la Academia, para que ésta determine su adquisición; el 3º, que recomienda a las Autoridades Eclesiásticas y Seculares una eficaz cooperación y celosa diligencia en este punto; el 5º, que trata de la obligación a que se encuentra ligado los pueblos y ciudades, que poseen monumentos en parajes, donde pueden aniquilarse, de notificarlo a dicho cuerpo y el 7º, que cuando a las justicias de ellos, tomen todas las providencias que estén a su alcance, para conservar no solo los monumentos descubiertos, sino los antiguos edificios existentes dentro de o en despoblados, prohibiéndole su demolición, aún en caso de inminente ruina, sin dar parte a la Academia(1º).*

Una cuestión primordial sería el respeto de la integridad de los bienes arqueológicos, por lo que no fueran empleados, *así inscripciones, columnas y mármoles, como estatuas, relieves, frisos, sepulcros, en separar sus haciendas y caseríos, incrustándolos en sus paredes, como frecuentemente se observa, maltratándolos, rompiéndolos, destinando preciosos utensilios a usos inmundos y despreciables, fundiendo las medallas y laminas de bronce, plomo, cobre; truncando las armas de hierro o de otro metal por objetos de uso vulgar; para que de esta suerte desaparezca hasta los recuerdos de la grandeza y sean estériles los conatos de la Academia para ilustrar la historia.* Las autoridades locales quedaban obligadas, al igual que los particulares, *de proceder a la conservación de tales objetos, dando parte, cuanto antes pueda, al encargado de la Inspección de antigüedades en Andalucía por el Gobierno y por la Real Academia, de los descubrimientos, sitios, objetos hallados para que se procure su adquisición, según lo mandado en el artículo 6º de la Real Instrucción, previa la indemnización, que en el mismo se señale (2º).* Al mismo tiempo ya llamaba la atención el mal uso que se hacía con el pretexto de la *pública utilidad, de la demolición de edificios antiguos, como castillos, fortalezas, murallas, zonas de vigías, torreones, cubos, aljibes y trozos o cimientos de argamasa,* por lo que instaba a que fuera la Real Academia de la Historia por medio de su encargado, y precediendo informe del Cuerpo, el Supremo Gobierno, quien decidiera si podría o no llevarse a cabo el proyecto (3º). Los ayuntamientos tenían la obligación de conservar sus archivos, suministrando y franqueando a la Academia o su encargado en Andalucía, las copias y noticias que se le pidieren, sin exigir otros derechos que los gastos de papel sin fuese necesario, siendo las comisiones de Amortización, las que debían separar todos los documentos no comprendidos en la clase de títulos de pertenencia de fincas rústicas o urbanas, censos, memorias; así como de formar

índices de los códigos de las especies arriba dicha, enviando copia de ellos a la Academia o a su encargado, para cuando lo crea oportuno, saque apuntes, copias o notas de ellos en provecho del país y de las ciencias (4º). En el ámbito del tráfico de bienes arqueológicos, dejaba claro que ninguna Corporación, pueblo, ni particular, podía, *bajo pretexto, ni excusa de cualquier especie, enagenar tales objetos*, sin la autorización de la Real Academia de la Historia o de su representante (6º).

El informe presentado por Ruano a la Real Academia de la Historia no sería presentado finalmente al Gobierno, excusándose a través de un Oficio fechado el 29 de octubre de 1842: *Con la atenta comunicación de V.I. del 11 del actual he recibido el papel en que V.I. ha extendido las bases, en que podría fundarse y entenderse, una instrucción en que, dirigida a los Jefes Políticos de esas provincias, de conservar las antigüedades del país, ya descubiertas, y las que se fuesen descubriendo en lo sucesivo. Ya en el año de 1803 formó la Academia una instrucción con ese mismo objeto, la cual están vigentes, y se comunico para si observancia y cumplimiento con la Real Cédula de 18 de octubre, y es la ley 3ª del título 20 del libro 8º de la Novísima Recopilación. A pesar de ello, vemos por desgraciadas experiencias, que todos los obstáculos que oponen las circunstancias actuales (...).* **En la Circular del Gobierno Civil de Córdoba de 15 de diciembre de 1842** sobre los deberes de los Ayuntamientos de Andalucía en la conservación de los objetos antiguos descubiertos o que se descubran. Dejaba claro la preeminencia de la Real Academia de la Historia sobre la inspección y conservación de las antigüedades, estableciendo la obligación primordial a los Ayuntamientos de los pueblos las disposiciones vigentes en este momento: *Habiendo conferido la Academia de la Historia, como encargada por nuestras leyes de la conservación de las antigüedades del Reino, todo sus poderes para el desempeño de la Inspección sobre las de Andalucía, al Dr. D. Manuel María de la Corte y Ruano Calderón (...) los ayuntamientos de los pueblos están constituidos en la obligación de cumplir lo que en ella se previene; debiendo tener presentes los artículos de la instrucción formada por aquel cuerpo en 18 de octubre de 1803, cuya observancia se mandó por la cédula de la misma fecha, y se acordó por la Real Orden del propio mes de 1818, para poder proceder con el debido conocimiento en la conservación de los objetos antiguos descubiertos y que se descubran. Tan luego como esto se verifique, los Ayuntamientos y particulares darán cuenta al Comisionado para la Inspección de Andalucía de todas sus circunstancias, tiempo del hallazgo, sitio en que se verificó, y demás que puedan interesar a la historia y antigüedades, copiando las inscripciones, sin destruirlas ni menoscabarlas; y no procediendo a su enajenación, sin dar antes el competente aviso al encargado, por si la Academia determine adquirirlas en su valor justo, a calculo prudencial de persona inteligente.* Al mismo tiempo se establecen unas obligaciones tanto para los Ayuntamientos como para los particulares, por lo que abre el camino a una limitación del dominio privado del patrimonio arqueológico: *Tan luego como esto se verifique, los Ayuntamientos y particulares darán cuenta al Comisionado para la Inspección de Andalucía de todas sus circunstancias, tiempo del hallazgo, sitio en que se verificó, y demás que puedan interesar a la historia y a las antigüedades, copiando las*

*inscripciones, sin destruirlas ni menoscabarlas; y no procediendo a su enajenación, sin dar antes el competente aviso al encargado, por si la Academia determine adquirirla en su valor justo, a calculo prudencial de persona inteligente. Más concluyente sería la limitación de uso sobre las antigüedades encontradas por los particulares: No se consentirá bajo pretexto alguno a los dueños de los objetos y memorias antiguas destinarlos a usos viles e inmundos, fundirlos o mutilarlos, troncándolos por los de uso vulgar, o poniéndolos en lugar donde pueden hallarse expuestos a inevitable ruina, al mismo tiempo que nuevamente subraya el papel de los Ayuntamientos y autoridades gubernativas de los pueblos, dando cuenta al encargado de la Academia; para que resuelva lo más útil a su conservación e ilustración: o los mande colocar en sitios cómodos y seguros, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la Instrucción vigente. El principio de utilidad pública aludido por los pueblos para destruir los muros, circuitos, estatuas, inscripciones, columnas, quedaría subyugado por la potestad pública, al quedar limitado al tener que ser avisado al Comisionado de la Academia, y a éste, de acuerdo con las autoridades de ellos, decida su conservación o destrucción, a fin de que en uno y otro caso no se irroge perjuicio, ni menoscabo a los monumentos históricos del país. De trascendental importancia para el patrimonio documental, identificado como antigüedades, al seleccionar en ellos las huellas históricas de la comunidad, fundamenta la potestad pública de los mismos, primero en la propia Real Academia de la Historia, como sucesora en el empleo de cronista de estos Reinos, que cuidaran la conservación de los códices, privilegios, cédulas, cartas pueblas y demás documentos como historias, apuntes cronológicos, repartimientos, memoriales, crónicas originales de conventos, monasterios, familias &c. en cuanto puedan ilustrar los anales de la Nación y los propios Ayuntamientos de los pueblos que deberán franquear las copias que se les piden por el encargado de ella, o las notas, citas y demás datos, sin llevar otros derechos que el costo de papel y amanuense, cuando fuesen necesarios: exhortando a los administradores subalternos de arbitrios de amortización, á que asimismo pongan de manifiesto, y compulsen los documentos que les pidiesen; por ceder todo esto en beneficio de la gloria nacional. Se contemplaba a su vez la preeminencia del derecho de retracto en caso de la venta de antigüedades. En caso de enajenación de objetos antiguos y concurso de varios compradores, la Academia debe ser preferida a los demás, siendo igual el precio que ofrezca su encargado; pero procurando siempre los Ayuntamientos que las repetidas órdenes sobre extracción de objetos artísticos a otros países, tengan en este caso su debido cumplimiento; por pertenecer muchos de los que se descubren a las antiguas artes Españolas.*

### **2.3.1.5. La Sociedad Arqueológica Española.**

La Academia Española de Arqueología tuvo como origen la Sociedad Numismática Matritense, que había nacido en 1837, de la mano del bibliotecario y conservador del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional, Basilio Sebastián Castellano de Losada, el catedrático de árabe

Francisco Bermúdez de Sotomayor, el actor de teatro y escritor Pedro Mate y el escultor Nicolás Fernández. En 1839 cambiaría su denominación, pasando a denominarse Sociedad Arqueológica Matritense y central de España y sus colonias. Poco después se dirigiría a la Reina para que se le otorgase el rango de Real Academia, siendo emitido un dictamen favorable en abril de 1840, fundado en la importancia del estudio de la Arqueología, y en el fomento que conviene dar a este ramo. Unos años después, mediante la promulgación de **la Real Orden del 5 de abril de 1844** se declaraba a la Sociedad Arqueológica Española academia nacional, en cuyo contenido se atestigua la impronta que se quiso dar a esta institución: *He dado cuenta a la Reina de la exposición de esa sociedad en solicitud de que se le conceda el carácter oficial con las prerrogativas e inmunidades de las academias nacionales del reino; y enterada S.M. como asimismo que se hallan inscritas en esa corporación personas respetables que honran a la nación con sus talentos y producciones; persuadida de que podrá hacer grandes servicios al Estado, ayudando al Gobierno á reconocer y resolver los monumentos esparcidos por nuestro suelo, y que tanto ha padecido en la pasada revolución, ha tenido a bien acceder a dicha solicitud, declarando a la sociedad arqueológica española academia nacional, y aprobando sus estatutos interinamente, mientras se forman otros con la debida meditación y detenimiento.* Hacia el 3 de junio de 1860 cambiaría nuevamente de denominación, pasando a llamarse Academia Española de Arqueología y Geografía, y posteriormente en 1863 se configuraría como Real Academia Arqueológica del Príncipe Alfonso. El objetivo de esta asociación aparece reflejado en el Diccionario de Madoz: *es difundir por toda la nación el estudio y examen científico de las antigüedades en todos los ramos del saber; buscar y publicar las obras inéditas de autores españoles que merezcan ver la luz pública, siempre que versen sobre puntos arqueológicos e históricos; evitar en cuanto pueda la destrucción de los monumentos antiguos españoles, y en caso inevitable pasarlos a la posteridad por medio de descripciones, dibujos y grabados (...) fomentar la estadística monumental de Europa y promover, por último, por cuantos medios sean factibles, el progreso de las ciencias arqueológicas.* Su papel en la protección del patrimonio monumental se vio reflejado en la creación de las llamadas Diputaciones Arqueológicas, que eran una especie de representación de la Academia en cada provincia, cuyos miembros la mayoría de las veces formaron parte de las Comisiones Provinciales de Monumentos. Probablemente su pretendida actividad de inspectora de Antigüedades de España, le enfrentaría con la Academia de la Historia, conservándose en fecha de 1850 un escrito de ésta, en la que pediría que siguiera ostentando en exclusividad la inspección de las antigüedades: se acude pidiendo que S.M. le continúe aquella protección real que siempre le dispensaron sus predecesores, declarando en este caso que la creación de la nueva Academia Arqueológica sea y se entienda sin perjuicio de la inspección, que corresponde a la de la Historia sobre todas las antigüedades del Reino: que la conservación de ésta se haga según las propuestas de la misma Academia (...). La respuesta por parte de la Administración fue muy contundente, negando la razón a la Real Academia de la Historia: *¿Quiere aspirar la Academia al Gobierno*

*de la facultad de crear otras corporaciones análogas? En nada se ha tocado a su especial y primitivo instituto que es la de esclarecer la historia de España: la parte arqueológica es un agregado sin duda para aquel objeto, pero que merece tal vez un cuidado y estudio más detenido y extenso que el que pueda dedicarle (...) En tal estado el establecimiento de una Academia exclusivamente dedicada a la parte arqueológica y numismática, parecía no solamente útil, sino necesario; y el Gobierno podía presentar harta razones para apoyar su aparte resolución*<sup>2358</sup>. A pesar de su amplia proyección, al estimular publicaciones periódicas y formar una interesante biblioteca al mismo tiempo que configuraba una amplia colección de antigüedades (más de seiscientas piezas), tendría una corta vida al ser suprimida por la Orden firmada el 31 de octubre de 1868.

Los conflictos de competencia de la Real Academia de la Historia con van a ser frecuente y objeto de un interesante debate en torno a la tutela pública del patrimonio arqueológico, especialmente en el ámbito del régimen patrimonial del bien arqueológico conservado. El caso más significativo que refleja la documentación conservada de esta etapa sería el de la lámina de plomo encontrada en un túmulo de la localidad de Puch (Castellón de la Plana)<sup>2359</sup>. En 1851 Don Vicente Roca lo encontraría en una excavación arqueológica, y se lo entregaría al Gobernador Civil de la provincia, para que lo custodiara, y éste se lo remitió a su vez a Basilio Castellanos, miembros de la Academia Arqueológica. La reclamación de la Real Academia de la Historia no se hizo esperar fundamentado en dos cuestiones primordiales: 1º) el hecho de que apoyándose en la legislación vigente le correspondía la inspección y conservación de los monumentos históricos de todo el territorio nacional y 2º) que la propiedad del plomo era pública y por consiguiente no podía estar en poder de la Real Academia Arqueológica, a la que consideraban una institución privada. En la **Minuta de oficio de 22 de junio de 1867** en la que se comunica las propuestas de la Comisión de Antigüedades relativas al problema de la propiedad del plomo ibérico del Puch, lamentando *que en vano las leyes encomiendan la inspección y custodia de esta clase de monumentos a la Academia de la Historia; en vano la Academia movida de su celo, practica exquisitas diligencias a fin de estudiarlos, compararlos e interpretarlos; en vano se esfuerza en arrancar sus secretos a las piedras y al bronce, si las mismas autoridades contribuyen a que se le arrebatan los tesoros de las antigüedades, ofreciéndoselos a personas u organización que carecen de toda oficial competencia. La Arqueología, o sea el estudio de los monumentos antiguos, es un producto auxiliar de la historia, que no puede dar un paso, sin tomarla por guía, subrayando que solo una corporación dotada de vida y compuesta de personas versadas en los distintos ramos del saber que rinde tributo a la historia, puede y debe guardar en toda su pureza el sagrado depósito de las glorias*

---

<sup>2358</sup> LUZÓN NOGUÉ, J. M. *La Real Academia de Arqueología y Geografía del Príncipe Alonso* en MARCOS POUS, A (Coord.), *De gabinete a Museo: tres siglos de historia*. Madrid, 1993, pp.271-275.

<sup>2359</sup> *Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia*. Valencia, Murcia, Madrid, 2001, pp.19-20.



y tradiciones de la madre patria, añadiendo que los artículos 159 y 160 de la Ley de 9 de septiembre de 1857 consagran la existencia de cinco Real Academias, todas las demás que hubiera en España, son asociaciones particulares establecidas con autorización del Gobierno, ninguna, fuera de aquello tiene la sanción del legislador (...). Pero para el caso que nos ocupa debemos detenernos en el fundamento que reclama el informe incluido en la citada minuta ya que al referirse si un bien arqueológico formara parte de un dominio privado, quedaría en manos del dueño: *Pudiera objetarse que habiéndose descubierto en terreno de propiedad particular, es cosa perteneciente a dominio privado, y que de la voluntad de su dueño quería guardarla para sí, o cederla a quien más le agradara*, por lo que se estaba subrayando el dominio absoluto de la propiedad privada del bien arqueológico, pero se estaba alegando que constaba que *D. Vicente Roca entregó dicha lámina en el Gobierno Político, y el Gobernador, presidente de la Sociedad Arqueológica, la remitió al Sr. Castellanos, presidente de la Academia de este nombre, de aquí resulta que la lámina en cuestión pasó del dominio particular al del Estado (...) al cual pertenece virtualmente aquella lámina, desde el instante en que su propietario la donó al Estado en 1851 (...)*. El 12 de julio y el 22 de agosto de 1867 sería reclamada de esta manera mediante oficio por la Real Academia de la Historia a Basilio Sebastián Castellano de Losada la entrega del plomo ibérico del Purch a la Real Academia de la Historia CACS/9/7950/03(07). Con el mismo fundamento jurídico días después, el 16 de septiembre de 1867 el director del Museo Arqueológico de Madrid remitía un oficio a Baltasar Sebastián Castellano para que fuera devuelto el plomo con inscripción ibérica, por ser propiedad del Estado, y por consiguiente no poder estar depositado en la Academia del Príncipe Alfonso: *Parece que la lámina mencionada se encuentra hoy en poder de la que lleva el nombre de la Academia de Arqueología del Príncipe Alfonso, más como el Gobernador de Castellón no pudo, ni pensó seguramente, transmitir la propiedad de un monumento de tal especie a persona ni corporación particular de ningún género, se está en el caso de que la antes citada entregue sin excusa el objeto en cuestión al Museo Arqueológico de mi cargo, al que pertenecen todos los que fueren propiedad del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del Real decreto de 12 de junio último.*

#### **2.3.1.6. La intervención de las instituciones privadas en el ámbito de la protección del Patrimonio Arqueológico: La Sociedades Amigos del País y Ateneos.**

Además del papel que desde el ámbito administrativo jugaron la Academia de la Historia, la Comisión Nacional de Monumentos y las Comisiones Provinciales, en el ámbito de la protección patrimonial, cabe mencionar una serie de instituciones privadas que ayudaron a la concienciación social por el patrimonio, e incluso abrieron el camino a una mejor conceptualización de los bienes a proteger jurídicamente, de las que destacan las Sociedades Amigos del País ya habían nacido en la centuria anterior, pero



en este periodo van a ir incrementando su papel trascendental en la salvación de un amplio número de bienes arqueológicos, a instancias de sus propios miembros<sup>2360</sup> y los Ateneos que nacen al amparo de la burguesía liberal en varias provincias, de las que cabe mencionar la fundada en 1835 en Madrid, con la denominación de Ateneo Científico y Literario, por iniciativa de Salustiano Olózaga y Mesonero Romanos, siendo definida como *una sociedad privada patriótica y literaria, punto de reunión de hombres instruidos*. Entre las actividades del Ateneo, se organizaron una serie de Cátedras, entre las que se perfilaron las de Arqueología, que sería dirigida por Basilio Sebastián Castellanos de Losada o la de Historia y Bellas Artes, que lo impartiría D. Manuel de Assas y Ereño, organizando una serie de conferencias y cursos sobre el patrimonio histórico, artístico y arqueológico español, como el titulado *Monumentos arquitectónicos de España*, entre los que participaron J. Puyol, R. Becerro de Bengoa, A. Fernández de Casanova, etc., figuras relevantes de la erudición arqueológica española de la segunda mitad del siglo XIX.

### **2.3.2. La preminencia del derecho de la propiedad privada sobre la tutela pública de los hallazgos arqueológicos en dominio privado: La pervivencia de la Real Cédula de 1803.**

#### **2.3.2.1. El caso de enajenación de obras de antigüedad en dominio particular: el Tesoro de Guarrazar.**

El descubrimiento del tesoro visigodo de Guarrazar (Toledo) ha sido objeto de un amplio análisis no solamente en el campo de la historiografía científica, sino que al mismo tiempo constituye una interesante página en la historia jurídica del Patrimonio Monumental, al producirse un conflicto tanto en el ámbito de la diplomacia europea de los años centrales del siglo XIX, y al mismo tiempo un supuesto conflicto judicial entre los intereses nacionales que representaban los bienes del tesoro arqueológico encontrados y el de los particulares, que en principio no habían realizado ningún acto de infracción legal o administrativa<sup>2361</sup>. El tesoro de Guarrazar fue descubierto a raíz de unas fuertes lluvias por una pareja de campesinos que pasaba por el cercano camino de Toledo en agosto de 1858 que dejaron en superficie un conjunto de objetos pertenecientes al arte visigodo. Otro labrador, cuya familia era dueña de una finca vecina, uno o dos días después, hallaría un segundo hoyo y se apoderó de un conjunto de objetos<sup>2362</sup>. Uno de los descubridores, F. Morales contactó con

---

<sup>2360</sup> SERRANO GARCÍA, Rafael “El fin del Antiguo Régimen (1808-1868)” en *Historia de España* Tomo XXV, pp.166-167.

<sup>2361</sup> ALONSO REVENGA, P.A. “Las versiones del hallazgo del tesoro de Guarrazar”, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, XIV, 1996, pp. 95-110.

<sup>2362</sup> El relato del descubrimiento aparece recogido en Alonso Revenga, Pedro Antonio, pp.16-17: *En la noche del 25 de agosto de 1858, transitaban un hombre y una mujer en sendos borriquillos, por el camino que va de Toledo a Guadamur, y al llegar a la fuente de Guarrazar, observaron a la claridad de la luna que las aguas de una gran tormenta que habían descargado allí el día anterior, habían arrastrado la tierra (...) dejado al descubierto*

A. Herouart, profesor de francés de la ciudad, quien se hizo cargo de negociar la venta de lo que restaba del primer lote. Después de una serie de vicisitudes serían vendidos al Gobierno francés, apareciendo poco tiempo después en la prensa gala la noticia de la compra que llenaría de indignación en la opinión pública española.

Desde el Ministerio de Fomento, donde actuaba como oficial en la Dirección de Instrucción Pública el académico de la Historia, Aureliano Fernández-Guerra, escribiría una nota el 18 de marzo para abrir una investigación judicial en el terreno. De esta manera, se promulgaría la Real Orden de 25 de marzo de 1859, por lo que el Ministro de Fomento mandaría al Fiscal de la Audiencia de Madrid, de la que dependería el Juzgado de 1º instancia de Toledo, iniciar la información judicial<sup>2363</sup>. La documentación procedente de la investigación judicial que está conservada en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, nos permite conocer las circunstancias del descubrimiento, los autores, y el destino de algunas de las joyas. Así del 28 de marzo al 2 de abril de 1859, el Juzgado de 1º Instancia de Toledo constituido en Guadamur tomaría declaración a los sujetos relacionado con el hallazgo; y posteriormente, en Toledo entre el 4 y 8 de abril de 1859, declararían los plateros y testigos de las ventas. Una vez recibido los expedientes, el Ministerio de Fomento lo devuelve para que se amplíe algunos puntos, y desde el 6 al 7 de julio el Juzgado realizaría nuevas actuaciones, remitiéndose toda la información a Madrid. La declaración de los joyeros son ambiguas, especialmente la de José Gómez, que reconocería la adquisición de joyas a Manuela de la Cruz, hermana del segundo descubridor o la de Mateo Gamero<sup>2364</sup>.

---

*unas como sepulturas. Por curiosidad, se bajó la mujer de su borrico y se acercó a ellas, y en una hoya cuadrada de hormigón (...) vio con maravilla relucir algo extraño. A sus exclamaciones se apeó también el hombre, e introduciendo la mano en la hoya, tropezó con un objeto a modo de collar (...) Lo sacó fuera, y tras este objeto, otras de distintas formas, y luego una cruz y luego una corona, y después otra mayor (...) Llevaron con todo sigilo el tesoro encontrado (...) a la noche siguiente provisto de un farolillo y las necesarias herramientas, volvieron a registrar el maravilloso escondrijo, de donde sacaron todo lo que en el aun contenía. Sin embargo, en el mismo trabajo Amador de los Ríos haría la siguiente reflexión: nos dolemos de que hayan dejado de pertenecer a España, aunque sea temporalmente, las coronas que ilustran hoy el Hotel Cluny; pero entre los dos extremos de que ornaran un museo extranjero o hubiesen perecido en el crisol de un ignorante o de un codicioso, optaríamos siempre, sin vacilar, por el primero, movidos del noble y trascendental interés de la ciencia (...), AMADOR DE LOS RÍOS, 1861, p.106.*

<sup>2363</sup> BALMASEDA MUNCHARAZ, Luis J. “El modelo de Guarrazar: Real Academia de la Historia y presidiarios de una excavación decimonónica” en MORA, Gloria; DIAZ-ANDREU, Margarita, *La cristalización del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*, Málaga, 1997, p.208.

<sup>2364</sup> BALMASEDA MUNCHARAZ, Luis J. “El tesoro perdido de Guarrazar”, *Archivo Español de Arqueología*, 68, Nº171-172, 1995, pp.150-152.

Cabe mencionar como al mismo tiempo que se estaban realizando las investigaciones judiciales, la Comisión Provincial de Monumentos se implicaría en el asunto, interrogando al supuesto descubridor, trasladándose todos sus miembros el 27 de febrero para examinar sobre el terreno el estado de la cuestión, por lo que se insta a realizar excavaciones desde la propia institución local, siendo desautorizada por el propio Gobierno, ya que será a instancia del Ministerio de Fomento quien realmente lo haga, quien tras una Real Orden dirigida al gobernador de Toledo va a instar los trabajos como complemento de las investigaciones judiciales, donde aparece cuales son los fines de los mismos: *Para complemento de una información judicial sobre el hallazgo de antigüedades sobre el hallazgo de las antigüedades en el término de la villa de Guadamar que por el Juzgado de 1ª instancia de esta ciudad se ha llevado a cabo en virtud de la R.O. fecha 25 del mes anterior, la Reina (q.D.g.) ha tenido bien mandar disponga V.I. se practiquen excavaciones en el terreno y en los sitios inmediatos donde dichos objetos parecieron, con el fin de investigar si fue éste en lo antiguo sagrado y eclesiástico.* Como integrantes de esta Comisión de Excavaciones serían nombrados Emilio Lafuente, del Ministerio de Fomento y José Amador de los Ríos, que representaba a la Real Academia de la Historia<sup>2365</sup>. Sin embargo, por la inoperancia burocrática de este periodo, la excavación quedaría diluida como consta en los tres informes fechados el 15, 17 y 28 de abril, firmados por Amador de los Ríos, y publicadas en la Gaceta de Madrid el 14 de abril de 1859<sup>2366</sup>.

El Gobierno iniciaría contactos diplomáticos a través del Ministerio de Estado y del embajador en París a fin de evitar la compraventa (pues Navarro todavía no había conseguido el dinero francés) para que se pudiera devolver las piezas a España. Unos meses antes, Herouart habría comprado el terreno del hallazgo y con Morales había excavando tratando de encontrar más joyas, que no encontrarían finalmente. La Comisión Provincial de Monumentos se desplazaría a Guarrazar para que pudiera investigar los sucesos ocurridos, al mismo tiempo que la propia Academia de la Historia, después de haber sido nombrada una comisión con este fin, siendo presidida por José Amador de los Ríos<sup>2367</sup>. Debido a que surgieron dudas sobre el lugar exacto de los terrenos

---

<sup>2365</sup> BALMASEDA MUNCHARAZ, Luis, J., 1997, pp.208-209.

<sup>2366</sup> AMADOR DE LOS RÍOS, *El arte latino bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar. Ensayo histórico-crítico*, Madrid, 1861.

<sup>2367</sup> El propio Amador de los Ríos refleja en su trabajo la indignación vivida en este momento: *Producía entre tanto unánime sorpresa en la nación entera la infeliz noticia de que tan rico depósito de las artes españolas, consagrado con el nombre de uno de los más celebrados Reyes visigodos, habían dejado de pertenecernos, con mengua de nuestra actual ilustración y no con gloria de quien hacia a su patria la injusticia de tenerla por indigna de tal riqueza. En la prensa de Madrid y de las provincias, en las Reales Academias, en las Cortes del reino resonó al par aquella noble queja, que protestaba generosa contra la acusación nacida de semejante conducta, y condenada esta sin apelación, despertando vivamente el interés del Gobierno. Aunados todos los deseos, mientras acudía el Ministro de Estado a las vías diplomáticas, consiguiendo muy lisonjeras promesas, procuraban primero la Real Academia de la Historia y el Ministro de Fomento investigar cuanto hubiese de cierto y positivo en el ya famoso hallazgo del Tesoro, inquiriendo no sólo las circunstancias con el que se había*

donde se habían encontrados las joyas visigodas, si eran pertenecientes al Ayuntamiento o bien en la finca adquirida por el francés, se comenzó una investigación arqueológica, al mismo tiempo que judicial. Y es que la cuestión se complicaría ante la exigencia del Gobierno francés de demostrar la ilegalidad de la posesión de las joyas mediante la sentencia judicial<sup>2368</sup>. El segundo lote de los objetos visigodos tuvieron otro destino, por lo que desde septiembre de 1858 a febrero de 1859 De la Cruz vendería gran parte de las piezas en un viaje a Toledo, pero en esta ocasión, a raíz de las gestiones y obstáculos que se encontró por la iniciativa de la Comisión Provincial de Monumentos cesaron las ventas. En Mayo de 1861, se presentó en Aranjuez, donde estaba pasando unas vacaciones la Reina, donándole una corona y una cruz, a los que después se unirían otras piezas más que terminarían custodiadas en el Palacio Real de Madrid<sup>2369</sup>.

De gran importancia en el ámbito jurídico son las reclamaciones diplomáticas que el Gobierno Español interpuso ante su homólogo francés para que no se formalizase la venta de las piezas arqueológicas que habían sido sacadas del país. Como apunta Rafael-Gonzalo Viñas Filloy, el propio hecho de reclamarse públicamente por parte del Gobierno la devolución de estos bienes *se comenzaba a poner de manifiesto con sus actuaciones que las antigüedades nacionales estaban dejando de constituir un interés particular para ser compartidos por grupos de individuos. No se trataba de una cuestión de partido, sino que, parafraseando la prensa del momento, era una cuestión nacional en la que estaban interesados todos y más que nadie el gobierno, obligado a conservar la dignidad de la nación*<sup>2370</sup>. El intento de suspender la venta de los bienes arqueológicos por parte del diplomático español en París, Alejandro Mons, al no haberse pagado todavía al José Navarro, en principio llegaría a buen puerto al prometer las autoridades galas no realizar en principio el pago hasta el propio Emperador decidiera. El Ministro de Estado, Saturnino Calderón Collantes, enviaría al embajador un escrito, donde aparecía insertado un Informe realizado por José Amador de los Ríos, que había sido comisionado por la Real Academia de la Historia, a principio del mes de marzo de 1859 para que estudiara el asunto in situ. El insigne erudito, que en 1861, publicaría una monografía sobre el tema, dio un informe jurídico sobre las condiciones del hallazgo y de la adquisición de las piezas, que aclara en cierta forma la situación legal en que se encontraba

---

*realizado, sino también la naturaleza y carácter del lugar en que existía; punto principalísimo, que movió al Gobierno a disponer que se hicieran en aquel sitio oportunas excavaciones.* AMADOR DE LOS RÍOS, 1861, José pp.1-2.

<sup>2368</sup> ALONSO REVENGA, P.A. *Historia del descubrimiento del tesoro visigodo de Guarrazar*, Toledo, 1988.

<sup>2369</sup> ALONSO REVENGA, P.A. El tesoro perdido de Guarrazar *Archivo Español de Arqueología*, 68, 1995, pp.149-164.

<sup>2370</sup> VIÑAS FILLOY, Rafael-Gonzalo, “Administración Pública y Antigüedades: El Tesoro de Guarrazar”, en MORA, Gloria; DIAZ-ANDREU, Margarita, *La cristalización del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*, Málaga, 1997, p.215.

la tutela pública de los bienes arqueológicos descubiertos por particulares en este momento. El principal fundamento, y el que más insistió, es el que se refería a la forma, ocasión y naturaleza del descubrimiento, así como el carácter especial de los objetos que lo constituían que, por su carácter histórico, eran exclusivo del patrimonio nacional, por lo que, desde el punto de vista legal, no se podría hablar de un verdadero hallazgo, sino de un depósito por ser el dueño conocido, como prueban las distintas inscripciones votivas que aparecen en las coronas, para lo que haría referencia al Fuero Juzgo, en el que se declaraba que *todo lo adquirido por los Monarcas durante su reinado pertenezca de derecho a los Reyes sus sucesores y no a sus hijos ó herederos*. Al mismo tiempo, el propio Amador de los Ríos apuntaba la clara intención de depósito, causado por un momento de conflictos bélicos, *con ánimo deliberado de poner a cubierto de la invasión sarracena; y por tanto con la esperanza de recobrarlo con entero derecho, pasado el peligro*, situación que se podía equiparar con lo que se observa en la legislación de las Partidas, en la Ley VII, título IX de la Partida V, dedicada a los naufragios, en virtud de la cual todo lo que se halle como consecuencia de éstos pertenece a su dueño: *que las cosas que son falladas en la ribera del mar, quien sean despojos de navíos o de echamientos deben ser tomadas á sus dueños (...)*. Incluso en el caso de que pudiéramos contemplar el hecho como un hallazgo propiamente dicho, se haría referencia la recién promulgada Ley de mostrencos de 9 de mayo de 1835, que dispondría que pertenecía al Estado, *entre otros bienes somovientes, muebles e inmuebles se de la mitad de los tesoros, ó sea de las alhajas, dinero ú otra cualquier cosa de valor ignorada u ocultada que se hallen en terrenos pertenecientes al Estado*. Posteriormente, Amador de los Ríos en el periódico La España señalaría que *se considera lo que el Código Civil francés, basado como las Partidas en la legislación romana, dispone sobre casos análogos, siendo indudable, según el indicado Código, que los descubridores de las Coronas góticas de que se trata, están virtual y formalmente constituidos en guardadores de un depósito necesario*. En un segundo Informe del académico, insiste que el fundamento principal para poder reivindicar las coronas debía de ser su consideración de depósito y no de hallazgo, a lo que aporta una nueva argumentación al referirse que *el depósito no se hizo sólo en lugar conocido, sino también santo y sagrado*, por lo que se podía aplicar las leyes que prohibían que fueran tocados estos bienes<sup>2371</sup>.

Las Coronas fueron adquiridas por el Ministro del Estado de Francia en la cantidad de 100.000 francos franceses con destino al Museo del Hotel de Cluny, siendo ocho coronas y quince cruces el total de bienes adquiridos. La noticia de la venta y del descubrimiento llegaría pronto a España, desatando un amplio malestar en la opinión pública española. La reacción del Gobierno no se hizo esperar, por lo que por Real Orden de 9 de abril de 1859, se establecía que se hiciesen excavaciones en el lugar, por lo que sería nombrada una Comisión, entre quienes se encontraba Amador de los Ríos. Las actuaciones del

---

<sup>2371</sup> VIÑAS FILLOY, Rafael-Gonzalo, pp.216-217.



embajador español se dirigieron a convencer a Navarro para que rompiera el contrato y devolviera las joyas, petición que estaba dispuesto a aceptar, siempre que el gobierno español le declarase propietario legítimo de las alhajas. Finalmente, acepta las peticiones de Alejandro Mons y reclama al emperador la nulidad del contrato de venta de las coronas. Sería en este momento cuando, el propio Mons presentase las reclamaciones oportunas al Ministro de Asuntos Exteriores francés, momento en que empieza los problemas para la devolución, ya que debido a las presiones de los académicos franceses que no quieren que los tesoros salgan del Museo de Cluny, argumentándose que *cuando una cosa ha pasado a ser del dominio del Estado en Francia no puede salir de él sin la sentencia de un tribunal*, por lo que se exigiría al gobierno español que aportase algún documento judicial en la que se demostrase que Herouart y Navarro habían actuado ilegalmente. Sin embargo, el caso no llegó a cuajar, por circunstancias extrajudiciales, que reflejan las imprecisiones administrativas de esta etapa, ya que a pesar de que Mons reclamase insistentemente a las Cortes españolas que le fuera enviada una copia de la sentencia judicial en 1860, que era el dato más importante para resolver el asunto, el Gobierno Español mantendría un silencio absoluto, a lo que se uniría el hecho de que Navarro había consumado la venta de las coronas. En realidad, lo que ocurrió fue que como aparece en la documentación judicial del caso *no haber lugar la demanda reivindicatoria*<sup>2372</sup>. Como balance de este hecho, podemos nuevamente recoger las palabras de Viñas, al puntualizar que *estamos en un periodo en que, había que justificar la existencia de una legislación especial, a la que había que remontarse más de un milenio, para que se pusiera coto a la arbitrariedad y se asegurara la conservación y traspaso a las generaciones futuras del Patrimonio cultural español*<sup>2373</sup>.

### **2.3.2.2. La adquisición de la Real Academia de la Historia de bienes arqueológico de dominio privado: El disco de Teodosio.**

La Real Academia de la Historia en su condición de inspectora de antigüedades dada por la legislación vigente pudo salvar algunos bienes arqueológicos que iban ser vendidos al extranjero, como fue el caso del famoso Disco de Teodosio, encontrada en la villa de Almendralejo (Badajoz)<sup>2374</sup>. Se trataba de uno de los descubrimientos más significativos de la arqueología española en la década de 1840, por lo que su adquisición supuso un hito primordial en la investigación científica. Para exponer los hechos recogemos algunos fragmentos de la memoria de José María de Navascues sobre el hallazgo del mismo y las circunstancias en que fue adquirida por la Real Academia de la Historia: *El missorium se halló en término de Almendralejo el 25 de agosto de 1847, y desde la sesión de 3 de septiembre siguiente, la Academia le dedicó particular atención en diez de sus Juntas celebradas hasta el día 10 de diciembre (días 3, 10, 17 y 27 de*

<sup>2372</sup> VIÑAS FILLOY, Rafael-Gonzalo, pp.218-219.

<sup>2373</sup> VIÑAS FILLOY, Rafael-Gonzalo, p.221.

<sup>2374</sup> ALMAGRO, M. El disco de Teodosio, Madrid, Real Academia de la Historia, 2000.

septiembre; 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre; y 10 de diciembre)<sup>2375</sup>. En el **Informe del 3 de septiembre de 1847**, el Marqués del Socorro notificaba a la Real Academia de la Historia sobre las circunstancias del hallazgo del disco de Teodosio en un fondo particular de Almendralejo (Badajoz): *se encontró el medallón en 25 de agosto de 1847: estaban cavando grama Juan Aguilar y tres más, uno llamado Bartolomé Giraldo, el otro Pedro López y el otro José García vecino todos de Almendralejo provincia de Badajoz, a una tercia con un azadón al arreglar la tierra después de cabada se notó que había una cosa que hacía ruido, se despejó la tierra, y se encontró con un medallón doblado (...) La heredad era de Antonio Martínez sita en el sitio de Sancho, a unas mil varas del pueblo. Se comisionó a Miguel Salvá para que se entrevistase con el Marqués para que se retuviera el medallón (9-3-1847). Por otra parte, el Marqués de Monsalud, tío del Marqués del Socorro en una carta a la Real Academia de la Historia notificaría como habían podido conseguir que los dueños del medallón deshicieran el trato, que ya tenían efectuado con un Comisionado inglés, cuando estaban ya a punto de entregárselo y cediesen esta alhaja a la Academia. Una vez conocida la ley y el valor de la plata que tenía el Disco, se decide proceder a calcular el precio de la pieza, originándose un amplio debate entre los propietarios y descubridores de la misma y la propia Academia, de lo que se solventó en base a la urgente y necesidad de no permitir que un monumento de la naturaleza del que se trata, pudiera ser extraído de España, aunque los particulares en principio pedían una cifra muy elevada, por lo que se acordó que fuese analizada el valor arqueológico de la pieza en cuestión (1-10-1847). En la sesión de 8 de octubre de 1847 se decidió pagar 27.500 reales por la adquisición de la pieza. Juan Aguilar y Felipe Martínez deben considerarse los vendedores y copropietarios del Disco, ya que éste último se consideraba representante de su hermano Antonio, el propietario del terreno. Como Juan Aguilar, el verdadero hallador, era analfabeto, en su nombre firma Jerónimo Martínez<sup>2376</sup>. Finalmente, la pieza sería adquirida por el precio de veinte siete mil quinientos reales (8-10-1847)<sup>2377</sup>. Como se puede contemplar, el Estado todavía no tiene preferencia en la adquisición de piezas arqueológicas en este momento, por lo que prima el interés privado, por el que el particular tiene una libertad de disposición y gozo de las piezas en cuestión.*

### **2.3.2.3. El derecho de adquisición de los descubridores y propietarios particulares: El caso de la adquisición de las momias de Canarias.**

---

<sup>2375</sup> De Navascues, José María Informe sobre el Disco de Teodosio, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 173, Cuaderno 3, 1976, pp.428-429

<sup>2376</sup> ALMAGRO-GORBEA, Martín; ALVAREZ MARTINEZ, José María; BLAZQUEZ MARTINEZ, José y ROVIRA, Salvador, *El disco de Teodosio*, Real Academia de la Historia, 2000

<sup>2377</sup> MAIER, J., pp.176-178.

Con motivo de la visita a Tenerife en 1859 del archiduque Imperial Fernando Maximiliano, éste se interesó en conseguir unas momias guanches, por lo que encargó a Diego Benítez, un especialista en la materia en buscar algunas piezas, logrando con la ayuda de uno de sus comisionados, Salvador González, descubrir en mayo de 1862 cuatro momias, en la jurisdicción del pueblo de Barranco de Araya (Candelaria, Tenerife), en un terreno de dominio privado. Al tener constancia del hecho el alcalde de la localidad informó al Gobernador Civil de la provincia de Canarias, quien en virtud del artículo 33 del Real decreto de 15 de noviembre de 1854, mandó requisar 4 momias guanches halladas en el Barranco de Araya (Candelaria, Tenerife) y como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de la Islas Canarias, debido a la inexistencia de un museo provincial solicitaría en octubre de 1862 informe a Madrid para que fuesen entregadas las momias a la Real Academia de San Fernando, la cual la trasladaría a la Real Academia de la Historia. Sin embargo, contaría con la oposición de Diego Benítez que el 22 de septiembre de 1862 envía una instancia en la que reclamaba la cuarta momia, la mejor de las conservadas, haciendo hincapié no solamente su afición por las antigüedades, sino la labor que estaba realizando a favor de la cultura nacional, teniendo para ello comisionadas a varias personas en Tenerife para localizar momias: *Que aficionado y admirador de las antigüedades, especialmente las de mi país, procuro reunir objetos curiosos de los primeros moradores de estas islas, antes de ser conquistadas e incorporadas a la Corona de España. Ha llenado mi principal deseo la adquisición de alguna momia de las que disecadas y conservadas por los indígenas guanches, suelen encontrarse en cuevas antiguas y en las que por efecto de la destrucción natural de los tiempo no es fácil frecuentar hoy perdida la senda que a ellas conducía.* A continuación expondría como a través de sus propios comisionados intentó adquirir unas momias *con el doble anhelo últimamente de complacer a S.A. Imperial el Archiduque Don Fernando Maximiliano que habiendo visitado estas islas en el mes de diciembre del año de 1859, me hizo el especial encargo de procurarle una momia, consiguiéndolo en un fundo privado, poniéndose desde luego de acuerdo para la extracción con el dueño del terreno donde se encontrase.* La reclamación de devolución de dichos bienes sería fundamentada en la propia instancia, bien defendiendo la posición de los halladores, su comisionado y el dueño del terreno, que habían recurrido al Gobernador Civil reclamando la devolución de las momias, fundados en la ley que no autoriza la expropiación en esa parte. Al mismo tiempo se uniría la oposición de los descubridores, Don Agustín Otazu, Martín Díaz y Salvador Hernández, *que según dice el Gobernador fueron los que las encontraron,* y D. Silvestre de Torres, como dueño del terreno, fundamentado en la aplicación de la Ley 45, título 23, partida 3, de 15 de mayo de 1835, en la que se establece que el dueño del terreno, Silvestre de Torres, tiene derecho a la mitad del hallazgo, mientras sus descubridores tienen derecho a la otra mitad. Por ello el Gobernador Civil de Canarias solicitó de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando un informe al respecto, que sería redactado por Pedro Gómez de la Serna el 29 de abril de 1864. Entre los antecedentes expuestos constaría *que Don Diego Benítez, vecino y natural de la villa*

*de Orotaba, manifestó a esta Academia que aficionado y recolector de antigüedades procuraba reunir objetos curiosos de los antiguos moradores de las Islas Canarias antes de su incorporación a la Corona de Castilla, que al efecto tenía comisionados en las principales comarcas para que le buscaran consiguieran alguna momia poniéndose de acuerdo para la extracción con el dueño del terreno en que se encontrara. Añade que para complacer a S.A. el archiduque D, Fernando Maximiliano que visitó la isla de Tenerife en 1859 había redoblado sus pesquisas que sabiendo por su encargado Salvador González que las momias casualmente halladas en Candelaria habían sido puesta por orden del Señor Gobernador a disposición de nuestra Academia, previno a su comisionado que con permiso del dueño de la finca donde se halla la cueva, hiciera excavaciones con el objeto de indagar si existía algunas antigüedades, y que el resultado fue encontrar una momia de mujer bastante conservada y que las autoridades adoptó respecto la misma medida que había tomado acerca de las otras. Concluye pidiendo que pues él, ha adquirido la momia de acuerdo con el dueño y que la ley no autoriza una expropiación se le devuelva.*

A la hora de analizar el fundamento jurídico en que los reclamantes defendían la posición del bien encontrado en este caso la referida momia guanche, parte de la base que la Ley 45 del Título XXVIII de la Partida III que disponía *que el dueño del suelo lleve la mitad por derecho de accesión y los que hallaron las momias la otra mitad por derecho de ocupación*, podían aplicarse a las momias que fueron halladas por casualidad, no así la momia reclamada por Benítez si es cierto que su cedente la encontró por resultados de las investigaciones que hizo, porque como dice la referida ley más si lo fallare buscándola estudiosamente e no por acaecimiento de ventura, entonces debe ser toda del Señor de la heredad, e non ha en ello quien así lo falla ninguna. Incluso sigue subrayando que incluso habiendo existido un convenio particular entre Salvador Sánchez y el dueño, hasta que no fuera demostrado, manifestando el propietario de la cueva un asentimiento, debería considerarse como ajeno a la cuestión al que encontró la momia mejor conservada y por lo tanto considerando solo al dueño del terreno si estuviere en el caso de aplicar la ley de partida. Y debe tenerse aquí presente que si bien esta ley fue derogada en 1381 por Juan I atribuyendo al Fisco los tesoros y dando la cuarta parte al que denunciaba su existencia, ha sido restablecida en nuestros días por la ley del 16 de mayo de 1835, según la cual solo corresponde al Estado la mitad de los tesoros y estos cuando son encontrados en terrenos que le pertenezcan. Pero ¿puede aplicarse a las momias los que las leyes de Partidas y nuestra legislación nueva dicen de los tesoros? Creo que deba contestar negativamente a esta pregunta. No encuentro en las leyes de Partida la definición de la palabra Tesoro, el derecho romano a quien siguió la ley antes mencionada no tiene esta cuestión, puesto que en un fragmento del jurisconsulto Paulo que se halla inserta en las Partidas se dice que es un antiguo depósito de dinero cuyo dueño no es conocido (...). Mas a pesar de esto nadie dirá que la palabra tesoro alcance a los esqueletos y a las momias; el considerar estas cosas como tesoros y aplicarles las reglas concernientes a ello, podría dar lugar a frecuentes profanaciones y así lo comprende la Real Academia española que aceptando la definición de Paulo dice en su diccionario que tesoro es un depósito antiguo de dinero o alhajas escondidos o de quien se ignora el dueño. En defecto, pues de definición legal, debiéramos citar a la inteligencia común y por lo tanto no

podríamos decir que el que encuentra un cadáver sepultado muchos siglos hace, encuentra un tesoro, aunque en la actualidad algunos se propongan especular con estos hallazgos. Más explícita la ley publicada en este Reinado de que antes hice mención que las antiguas, nos da la definición que echamos de menos en las Partidas, al decir que corresponde al Estado cuanto se halla en terrenos que le pertenece, la mitad de los tesoros, o sea de las alhajas, dinero u otra cualquier cosa de valor, ignorada u ocultada. Esta definición viene a robustecer la opinión que deje antes indicada. Creo por lo tanto que la ley de Partidas citada por el dueño de la cueva y por los que se encontraron las momias no es aplicable al caso actual. Es en la reflexión sobre la aplicación en este caso del Real decreto de 15 de noviembre de 1854, por el que el Gobernador Civil podía reclamar las momias encontradas y trasladarlas a un museo local o a la propia capital, donde encontramos la cuestión del derecho de la propiedad sobre el bien hallado. En una primera valoración del decreto alude como exclusivamente se refiriera la organización de las Comisiones encargadas de la conservación y mejora de los monumentos históricos y artísticos correspondientes al Estado y en el artículo 33 en el que se funda el Gobernador para poner a disposición de Nuestra Academia las momias, se limita a decir que donde no hubiera museos provinciales y por la escasez de objetos arqueológicos e históricos ya reunidos se haga imposible su creación, se pondrán éstos a disposición de la Real Academia de la Historia por conducto de la Comisión Central de Monumentos artísticos para plantear en la capital del Reino un museo arqueológico general, por lo que compréndase con la simple lectura de este artículo que ni directa ni indirectamente resuelva la cuestión de propiedad en los objetos arqueológicos e históricos que se encuentren, sino que se limita a dar destino a los que siendo del dominio público se hallen en provincias en que hallen posibilidades de coleccionarlos y conservarlos en gabinetes, subrayando a continuación que las Comisiones no tendrían potestad para ello ya que no se comprendería que las cuestiones de propiedad se resolvieran por el Gobierno cuando por su naturaleza son objeto de ley y que, aun dado caso que éste creyera tal facultad en sus atribuciones no sería el Ministro de Fomento, sino el de Gracia Y Justicia, el que fijare las reglas a que debía sujetarse, no siendo tampoco de creer que incidentalmente se cambiara el derecho civil del país en un Reglamento administrativo que tenía solo por objeto organizar las Comisiones de Monumentos históricos. Debe presumirse por regla general que el Gobierno en sus actos quiere arreglarse a las leyes y no inferir que ha pretendido separarse de ellas por conjeturas que no tengan sólida fundamentación. A lo que dejo expuesto se agrega que como en cuestiones de propiedad no son las autoridades administrativas las competentes, nada se adelantaría con que hubiera una u otra disposición de la Administración en sentido opuesto a la ley, porque el orden judicial no por esto se separaría de lo que en ella se hallara establecido. El Informe finalizaba defendiendo la aplicación de la ley 3 del Título XX del Libro VIII de la Novísima Recopilación, y en la Instrucción de 1803, que dictamina que son dueños de los monumentos a que se refiere aquellos que los hallare en sus heredades y casas y los descubren a su costa y por su industria siendo en tierras de dominio particular, como sucede en el actual caso, dando los descubridores, poseedores y justicias parte y noticia a nuestra Academia por medio de su Secretario para que tome el correspondiente conocimiento y determine su adquisición por compra, gratificación, según se concierne con el dueño. Y esto y solo



*esto, es lo que legalmente puede hacerse en el caso actual, examinar hasta que punto sería conveniente a la Academia la adquisición de todas, o de algunas de las momias y procurar la adquisición o dejar expedita a los dueños (...).* Finalmente el 6 de marzo de 1867 la Real Academia de la Historia, en su Informe emitido por el correspondiente Aureliano Fernández Guerra, remitido al Director General de Instrucción Pública, sugeriría que debía aplicarse la Ley 3 título 20, Libro de la Novísima Recopilación de 6 de julio de 1803, por lo que se precisaba que quien lo descubra en su propiedad particular, Silvestre Torres, sería su propietario, aunque se debía determinar que el Gobierno pudiera comprar todas o algunas de las momias<sup>2378</sup>.

### **2.3.3. La adquisición del Estado de los bienes arqueológicos descubiertos en dominio público.**

#### **2.3.3.1. El Dictamen de la Comisión de la Real Academia de la Historia del 27 de mayo de 1858 no autorizando la adquisición de bienes arqueológicos como propiedad particular e instando a resolverlo la promulgación de una ley de antigüedades.**

Las peticiones realizadas por algunos particulares, como José Loring, Julián Díaz Roldán reabrieron el debate que se estaba produciendo en torno a la tutela pública del Patrimonio Arqueológico, tanto en la intervención estatal como los derechos a insertarse en el dominio privado los bienes arqueológicos descubiertos. Con el objetivo de paliar los conflictos de intereses producidos en la tutela del Patrimonio Arqueológico, la Real Academia de la Historia creó una comisión a finales de los años cincuenta, para elaborar los antecedentes de una ley sobre los descubrimientos de antigüedades. De ello cabe mencionar el **Dictamen de 1858 de la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia sobre la tutela pública del patrimonio arqueológico**, formada por Antonio Cuvanilles, Pascual de Gayangos, Antonio Delgado, José Caveda, José Amador de los Ríos, Salustiano de Olózaga, Aureliano Fernández-Guerra y Pedro Sabau. En el momento en que fue redactado todavía estaba vigente la Real Cédula de 6 de julio de 1803, por lo que quedaba insuficiente en el nuevo marco legislativo de la España Liberal, por como apunta Maier, se hacía necesario establecer un nuevo marco jurídico que se adaptase a la nueva realidad política, económica y social, que regulase las excavaciones arqueológicas, la propiedad de los objetos descubiertos, y su destino, ya que aún no se había creado el Museo Arqueológico Nacional ni los Museos Provinciales, así como el derecho de los dueños de los terrenos. En este Dictamen de 1858 de la Comisión de Antigüedades se estaba plantando una serie de cuestiones que en cierta manera sintetizaba los problemas jurídicos que se planteaba en la legislación isabelina a la hora de proteger los bienes históricos y artísticos: 1º) La controversia entre el interés nacional y la

---

<sup>2378</sup> MEDEROS MARTIN, Alfredo en “Islas canarias”, MAIER, Jorge; ALMAGRO, Martín *250 años de arqueología y patrimonio: documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de la Real Academia de la Historia: estudio general e índices*, Madrid, 2003, p.298.

propiedad privada; 2º) La relación entre el descubridor y el dueño de terreno; 3º) El destino y propiedad de algunos de los objetos hallados ; 4º) Los permisos que habían de concederse a la hora de excavar; 5º) Las indemnizaciones que habría que concederle al descubridor. La Comisión de Antigüedades estimó que *es difícil conciliar el interés nacional con el individual para que este último siempre respetable no se oponga ni mengüe el interés nacional mucho más atendible*, añadiendo que *no tenemos ley suficiente que fijando las reglas y adoptando las precauciones necesarias declara cuando y en qué forma y con qué indemnización haya de poderse entrar con objeto de investigar antigüedades en la propiedad ajena, ya pública ya del Estado, ya particular en algunos casos, puntos ambos delicadísimos, ni tampoco ley que fije el destino que hayan de tener muchos de los objetos que pueden hallarse en tales investigaciones y sean dignos por su importancia de conservarse en los museos nacionales por la gloria del país y para los progresos de la ciencias: y además porque el Gobierno no debe tener en buenos principios y según las leyes una intervención directa y necesaria, ya para prevenir las contestaciones que pudiera ocurrir entre el descubridor y el Estado y los dueños de los terrenos en que se intente hacer el descubrimiento, ya también para determinar si todos los objetos han de ser del descubridor o se exceptuarán algunos que por su importancia deben de conservarse en la nación y en el local que el Gobierno señale*<sup>2379</sup>.

Los descubrimientos de los llamados Bronces Loringianos sería un ejemplo significativo de la posición que las autoridades públicas van a ir adoptando en la tutela del patrimonio arqueológico y los límites de su actuación cuando estas piezas se insertaban en la esfera privada. Los terrenos de la Hacienda de la Concepción fueron adquiridos por el Marqués de Casa-Loring hacia 1857 que se convertiría en un lugar de recreo, jardín botánico y museo arqueológico. Poco después, el 21 de mayo de 1858, José Loring solicitaría a la Real Academia de la Historia permiso para que fuera considerada de su propiedad, todas las antigüedades que se descubriese u obtuviera en las excavaciones o investigaciones que practicase en la provincia de Málaga, ya sea en terrenos valdíos o realengos, ya en campos o edificios particulares, indemnizando previamente a los dueños las cantidades que estos les exijan. En el Informe de la Comisión sobre el caso Loring subrayaba que no desconocía *el importante servicio que prestarían a la historia todos aquellos que sacaron del olvido los muchos y preciosos monumentos que sin duda alguna existen sepultados, ya que todos los días se descubren ya por la casualidad, ya por los trabajos bien dirigidos de algunos estudiosos. Considera asimismo dignos de aprecio público a los que llenos de amor a la ciencia, se dedican a ilustrar la historia por el hallazgo de antiguos documentos y a fomentar las demás ramas del saber humano. Pero al mismo tiempo es difícil conciliar el interés nacional con el particular, para que este último siempre respetable no se oponga ni mengüe el interés nacional mucho más atendible*. A pesar de esta negativa, Amalia, esposa del coleccionista emprendería una labor de recolección de objetos arqueológicos dispersados por la ciudad y provincia, confeccionando Berlanga un catálogo en 1868. Los

<sup>2379</sup> El texto aparece reproducido en MAIER, Jorge, 2003, pp.44-45.

Bronces quedarían colocados en la residencia de la Alameda en 1861, trasladándose posteriormente al museo de la Finca de la Concepción, permaneciendo hasta 1897, año que sería definitivamente trasladado al Museo Arqueológico Nacional<sup>2380</sup>.

La Comisión pediría a su vez que las controversias que se estaban produciendo entre el interés nacional y el de los particulares fuera promulgada una ley de antigüedades que resolviera las diversas lagunas legales que existían al respecto, para lo que se fijaran *las reglas y adoptando las precauciones necesarias declarase cuando y en qué forma y con qué autorización haya de poderse entrar con objeto de investigar antigüedades en la propiedad ajena, ya pública o del Estado, ya particular en algunos casos, puntos ambos delicadísimos, ni tampoco ley que fije el destino que hayan de tomar muchos de los objetos que puedan hallarse en tales investigaciones y sean dignos por su importancia de conservarse en los museos nacionales para la gloria del país y para los progresos de la ciencias, y además porque el Gobierno no debe tener en buenos principios y según las leyes una intervención directa y necesaria, ya para prevenir las contestaciones que pudieran ocurrir entre el descubridor y el Estado y los dueños de los terrenos en que se intente hacer el descubrimiento, ya también para determinar si todos los objetos han de ser del descubridor, o se exceptuarán algunos que por su importancia deban conservarse en la nación y en el local que el Gobierno señale*, volviéndose a subrayar a continuación la necesidad de una ley, *por lo que aprovechando esta ocasión podría hacerse presente la necesidad de que se fije en una ley la forma en que se halla de hacer los descubrimientos de antiguos monumentos, estableciéndose en ella el principio y las reglas, para evitar las muchas cuestiones que pudieran ocurrir entre el descubridor y los dueños de los terrenos en que se quieren hacer los descubrimientos; la necesaria intervención e inspección del Gobierno; el destino de los objetos hallados y en particular de aquellos que por su importancia histórica o artística sean dignos de conservarse como propiedad nacional en el sitio y lugar que el Gobierno señale los premios e indemnizaciones que hayan de concederse*. A pesar de que en esta ocasión no se promulgó ninguna ley, se puede afirmar que en este momento se estaba dando un paso decisivo por parte de la administración española durante el periodo isabelino en pro a convertir el Patrimonio Arqueológico en un verdadero dominio público, sin perder evidentemente el sentido nacionalista que presidía su fundamento jurídico.

El coleccionista Julián Díaz Roldán, que pediría autorización al Gobierno el 11 de octubre de 1856 para constituir una sociedad con objeto de hacer excavaciones en las ruinas de las provincias de Andalucía, por lo que se obligaba a constituir una sociedad con el objeto de formar un museo de antigüedades para el Estado bajo la inspección de la propia Real Academia de la Historia, para lo que se obligaba a ejecutar las obras bajo la dirección del

---

<sup>2380</sup> BERLANGA PALOMO, M<sup>a</sup> José, “La Comisión de Monumentos de Málaga y su actuación en los descubrimientos arqueológicos motivados por los derribos de las murallas de la Alcazaba (1904-1906)”, *Baetica: estudios de arte, geografía e historia*, N°22, 2000 p.115.

Arquitecto que se designase: *Pedía el primero autorización al Gobierno para constituir una sociedad con objeto de hacer excavaciones en las ruinas de Andalucía, según las bases que presentó y en las cuales se reconocía la inspección que por leyes del reino se hallan confiada a la Academia sobre las antigüedades que se descubran en todo el reino, y se obligaba a la proyectada sociedad a formar un museo de antigüedades para el Estado bajo la inspección o vigilancia de nuestra Academia, comprometiéndose a ejecutar las obras bajo la dirección del Arquitecto que designase, o remitir a la misma los apuntes gráficos y a escribir las memorias necesarias para la ilustración de la historia, no reservándose los socios para sí más que aquellos objetos que no ofreciesen forma artística, arquitectónica o estatutaria, y de ninguna manera los que indicasen algún uso y antiguas costumbres, ni las monedas, que la Academia juzgue necesaria.* En esta ocasión, la Comisión de Antigüedades formada por José Amador de los Ríos, Pascual de Gayangos y Antonio Delgado expondrían que sería del todo punto inconveniente y contrario al desarrollo de este linaje de investigaciones el oponerse a la formación de Sociedades que llevadas de un fin patriótico, se ofrezcan contribuir a los fines de este Cuerpo y al mayor lustre de nuestra civilización. Toda parece indicar que la Sociedad de Antigüedades de Antequera no llegó a realizar ninguna excavación. En algunas ocasiones vamos a encontrar la autorización de la propia Corporación Municipal para realizar excavaciones arqueológicas por particulares en el ámbito del dominio público, como es el caso de la concedida a Antonio Bori en el Castillo de Cullera, poniendo como condiciones que se realizaran bajo la dirección de un maestro de obras único de su clase en el pueblo, *de la fianza de 30000 pesetas y de la vigilancia del Ayuntamiento.* A la vez el propio Ayuntamiento consultaría la propuesta al Gobernador civil de la provincia que a su vez pasaría el expediente a la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, elaborando esta un informe en la que *ha opinado no haber inconveniente en acordar aquel permiso, pero con el objeto de que no sean defraudadas las miras del Gobierno de S.M. al establecer estos cuerpos encargados de velar por las glorias de nuestra patria,* siendo designado al Ayuntamiento de Cullera *obligación de dar cuenta al estado de las excavaciones todos los meses, de los descubrimientos que pueden ser hechos (...).* En el ámbito hispalense podemos resaltar el interés que mostraron los duques de Montpensier por las antigüedades clásicas, por lo que en 1855 solicitarían al Gobierno, sin conseguirlo, que le cediesen para su Palacio de San Telmo las antigüedades de Itálica que se encontraban en el Alcázar<sup>2381</sup>.

### 2.3.3.2. Los frustrados proyectos de ley.

Durante el gobierno de Leopoldo O'Donnell, el Director General de Instrucción Pública solicitó el 14 de diciembre de 1859 que la Real Academia de la Historia elaborase un Proyecto de Ley de Excavaciones y Antigüedades, siendo Ministro de Fomento, el Marqués de Corvera, Rafael de Bustos y

<sup>2381</sup> LLEO CAÑAL, V. *La Sevilla de los Montpensier*, Sevilla, Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, 1997, p.109.

Castilla-Portugal<sup>2382</sup>. El 16 de diciembre de 1859 se habría formado la Comisión de la Real Academia de la Historia que estarían formado por los antiguos miembros que habían redactado la base del Proyecto de Ley, a la que se uniría el letrado Pedro Gómez de la Serna. La Real Orden de 14 de diciembre de 1859 representa la primera iniciativa para elaborar un proyecto de Ley que regulase las excavaciones arqueológicas en España, *a fin de poner término de una vez a sustracciones escandalosas de libros, códices y antigüedades de todo género, que con mengua del patrio decoro se están repitiendo de medio siglo a esta parte; fijar la manera y forma más expedita de que la Nación recobre cuantas joyas literarias y artísticas se sepa hoy, o en lo sucesivo se supiera, que están en poder ajeno, bien en manos de particulares o en públicos depósitos dentro y fuera de España; asegurar la propiedad de los preciosos objetos de antigüedad que actualmente existen, y de los que de cualquier manera y en cualquier parte se descubran en lo sucesivo; y procurar su conservación del modo más oportuno.*

En los primeros años de los años sesenta, la Dirección General de Instrucción Pública iría a ser reiteradas peticiones a la Real Academia de la Historia, concretamente **el 22 de julio de 1862, el 14 de enero de 1864, el 15 de febrero de 1867, el 7 de junio, el 22 de septiembre y 23 de diciembre de 1867 y el 13 de marzo de 1868**, para que elaborara un Informe para que pudiera trabajar a la hora de promulgarse una Ley de Antigüedades, por lo que había que recoger todas las disposiciones normativas que estuvieran en vigor hasta la fecha. Posteriormente en las sesiones de 25 de septiembre, la última de la etapa isabelina<sup>2383</sup>. Hay que anotar como apunta Maier que este periodo coincide con una crisis del Gabinete de Antigüedades que se encontraba bajo la dirección de Aureliano Fernández-Guerra (1867-1894). Cabe mencionar como ya en el informe del 22 de julio de 1862 se subrayaba que la Real Academia de la Historia debía de elaborar el proyecto teniendo en cuenta *las diversas disposiciones legales que han regido en la materia, el derecho que a tales objetos pueden tener el Estado*. En el ámbito andaluz se cree que Manuel de Góngora en 1867 intentó hacer un proyecto de ley para permitir a los particulares realizar excavaciones por su cuenta y unas bases para la redacción de una ley de descubrimientos de antigüedades. A pesar de ello, la proyectada Ley de Excavaciones Arqueológicas que se intentó promulgar a lo largo de este periodo no terminaría cuajando por lo que habría que esperar al periodo de la Restauración para cumplir esta expectativa. La realidad es que como apunta Maier, los proyectos de ley no terminarían cuajando pues chocaba de lleno con el principio de la propiedad privada frente a la estatal que ensalzaba el espíritu de la Constitución de 1845<sup>2384</sup>.

---

<sup>2382</sup> MEDEROS MARTIN, Alfredo “Análisis de una decadencia. La arqueología española del siglo XIX. I, El impulso isabelino (1830-1867)” en *CAPAUM*, 36, 2010, p.172.

<sup>2383</sup> MEDEROS MARTIN, Alfredo, 2010, p.173.

<sup>2384</sup> MAIER ALLENDE, Jorge, *Noticias de Antigüedades de las actas de sesiones de la Real Academia de la Historia (1834-1874)*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2008, pp.75-76.



La formación de un Plan de Excavaciones fue solicitada a la Real Academia de la Historia por Real Orden de 15 de abril de 1868, por el entonces Ministro de Instrucción Pública, Manuel de Orovio y Echagüeto. El informe sería encargado al entonces Presidente de la Comisión de Antigüedades, José Amador de los Ríos, el 27 de abril de 1868, siendo presentado en junta académica el 6 de mayo del mismo año por Aureliano Fernández-Guerra, Eduardo Saavedra y Manuel Oliver<sup>2385</sup>. En el contenido del mismo se alentaba que toda excavación arqueológica se realizara con fundamento científico, por lo que se recomendaba que se siguiese las directrices establecidas en el Reglamento de 24 de noviembre de 1865, en el que se establecía que se *dictara las disposiciones oportunas, que debían dar por resultado, el deseado concierto, sino también una verdadera estadística de los sitios, donde podría realizarse provechosas excavaciones, con lo cual sería fácil por extremo establecer el plan que ahora solicita el Gobierno de S.M. sin que sea todavía posible proponerlo, con la seguridad y acierto debido*, por lo que debido a las circunstancias de que ninguna de las Comisiones, establecidas en toda la Península, había cumplido con la prescripción del párrafo 2º del artículo 28 del citado Reglamento, se estableciese como obligación a las Comisiones de Monumentos formar el catálogo de los despoblados que en cada provincia existiera. La propia Academia mostraría en el informe las dificultades que existían a la hora de confeccionar, *por carecer de los datos indispensables para ello, en todo lo que respecta al conocimiento de las localidades, en que pudiera aquel tener realización*. Ante la imposibilidad de confeccionar dicho Informe se recomendaba a la Real Academia de la Historia la Comisión de Antigüedades que se observase estrictamente los párrafos 3º 2º 1º y 2º de los artículos 17, 19, 24 y 25 del Reglamento de 1865; *previniendo al par los gobernadores de las provincias que cuiden con todo empeño de que ni por los empleados públicos, cualquiera que sea su clase y condición, ni por otra persona alguna se haga excavaciones, sin la autorización competente, en los montes, dehesas y demás propiedades del Estado*. Como podemos comprobar el derecho de la propiedad privada volvía a salvaguardarse en el contenido de un hipotético plan de General de Excavaciones, que incluso podríamos pensar que se encontraba el verdadero obstáculo. El Plan General de Excavaciones no se pudo realizar, como la propia Academia sostuvo, por el incumplimiento de los deberes que tenían asignados con el Reglamento de 1865 las Comisiones de Monumentos, por lo que se remitió una circular a los gobernadores civiles de la provincia para que observaran el exacto cumplimiento de sus obligaciones con la Academia de la Historia. A pesar de que en algunos poblados el Plan de Excavaciones se puso en marcha, quedaría paralizado con la caída de la reina Isabel II. Como apunta Maier, con todo ello se debe de subrayar que *con estas intervenciones se iniciaron en España las excavaciones arqueológicas oficiales, las cuales, si no aportaron en líneas generales importantes datos científicos, salvo excepciones, supusieron a pesar de ello, un paso importantísimo en el proceso de consolidación de este tipo de intervenciones con carácter oficial, línea de trabajo que,*

<sup>2385</sup> MAIER, Jorge “La Real Academia de la Historia y la Arqueología española del siglo XIX”, *Eres Arqueología/Bioantropología*, Santa Cruz de Tenerife, 12, febrero 2004, p.111.

*sin embargo, no encontró la continuidad deseada en las autoridades del periodo revolucionario y la Restauración, al introducir una mayor liberalidad, lo que supuso el definitivo retraso de nuestra arqueología.*

#### **2.3.4. La impronta del sistema normativo sectorial en la configuración del ordenamiento jurídico del Patrimonio Monumental.**

##### **2.3.4.1. La adquisición de terrenos de fundos privados por el Estado para realizar excavaciones arqueológicas: La frustrada aplicación de la ley de 17 de julio de 1836. El caso de Numancia.**

La adquisición de terrenos va a ser otro de los cometidos por la institucionalización administrativa de la tutela del Patrimonio Monumental, con el fin de salvaguardar aquellos yacimientos arqueológicos que poco a poco iban dando a la luz durante estos años. La expropiación forzosa del terreno privada para acometer por iniciativa pública excavaciones arqueológicas comenzaría a vislumbrarse en el periodo isabelino, como se demuestran en los distintos informes que la Real Academia de la Historia remitiría al Gobierno como se pueda apreciar en las intervenciones arqueológicas que se estaban realizando en la ciudad de Numancia, que había ido alcanzando durante este periodo una importante relevancia tanto por motivos científicos como de exaltación de la identidad nacional<sup>2386</sup>. En un primer Informe, fechado el 4 de abril de 1868, la Real Academia de la Historia pide al Gobierno que le ceda una subvención para llevar a cabo las excavaciones y ponerlas bajo su dirección, incluyendo una Propuesta de expropiación forzosa sobre los terrenos particulares donde se están desarrollando las excavaciones arqueológicas: *Continuando mis gestiones con los propietarios de terrenos enclavados y dentro del perímetro que deberá adquirirlo en el sitio que ocupó Numancia he llegado al convencimiento de que voluntariamente pocos, muy pocos, se prestarán a hacer la cesión. Unos no comentaron, otros se niegan, si bien diciendo que si se les obliga no opondrán resistencia (...) por consecuencia (...) solo podría llegarse a un término favorable instruyendo el expediente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública (...).* En un Informe posterior, fechado en 1º de abril de 1867 recomienda elevar al Gobierno la instrucción de un expediente con el fin de expropiar forzosamente, por causa de utilidad pública, los terrenos enclavados en el perímetro donde deben de continuar las excavaciones de Numancia, debido a que *voluntariamente muy pocos propietarios de terrenos enclavados dentro del perímetro que deberá adquirirla en el sitio que ocupó Numancia, se prestarán a la cesión.*

1º. Que el coste de las excavaciones hechas hasta el día en Numancia, asciende a 44935 pesetas; 2º. Que el resultado general ha sido poner de manifiesto una ciudad romana de corta extensión y del tiempo del imperio,

---

<sup>2386</sup>JIMENO MARTINEZ, Alfredo; DE LA TORRE ECHEVARRI, José Ignacio *Numancia, símbolo e historia*. Akal, 2005.

habiéndose enriquecido el museo de la Academia con todos los objetos extraídos y 3º Que lo primero que deberá hacerse será adquirir para el Estado el terreno de propiedad particular que ocupan las excavaciones, cercándolo y guardándolo de un modo eficaz. Para este objeto convendría comisionar algún académico que podría ir acompañado de algún funcionario administrativo que le auxiliase en calidad de delegado del Excmo. Sr. Ministro de Fomento. Se cursa un oficio el 4 de junio de 1867 por parte de la Dirección General de Instrucción Pública solicitando información sobre el valor y extensión aproximada de los terrenos que deben adquirirse para continuar con las excavaciones en Numancia y el posible acuerdo que podía hallarse con los propietarios. Se respondería con el Informe de 21 de junio de 1867 de la Real Academia de la Historia en la que se exponía la conveniencia de adquirir una seis hectáreas, cuyo coste ascendería a 2200 reales la hectárea, Al mismo tiempo se señalaba en cuanto a *la disposición de los propietarios a ceder sus tierras (...) conviene saber el Gobierno que en Garay son casi todos colonos, y que los propietarios son en corto número, y uno de los principales, es el Sr. Marqués de la Montesa, residente en esta Corte.* En el oficio de 10 de abril de 1868 se manifiesta la dificultad de conseguir un acuerdo amistoso con los propietarios de los terrenos que desean adquirir para proseguir las excavaciones de Numancia, por lo que se propone una expropiación forzosa por causa de utilidad pública: *Continuando mis gestiones con los propietarios de terrenos enclavados dentro del perímetro que deberá adquirirse en el sitio que ocupó Numancia, he adquirido el convencimiento de que voluntariamente pocos, muy pocos, se prestarán a hacer la cesión. Unos no contestan, otros se niegan, si bien dicen que si se les obligan no pondrán resistencia y los más indican que seguirán la suerte de todos. En consecuencia (...) solo podría llegarse a un término favorable instruyendo el expediente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública.* Un último Informe de la Real Academia de la Historia, recomendaría al Gobierno la instrucción de un expediente con el fin de expropiar forzosamente, por causa de utilidad pública, los terrenos enclavados en el perímetro donde debían continuar las excavaciones de Numancia, constando como *voluntariamente muy pocos propietarios de terrenos enclavados dentro del perímetro que debería adquirirla en el sitio que ocupó Numancia, se presentarán a la cesión,* aludiendo como en el caso de los terrenos del yacimiento arqueológico fuera declarado de utilidad pública, para lo que se podría aplicar la ley de 17 de julio de 1836 que en su artículo 2º preceptúa como obras de utilidad pública las que tienen por objeto proporcionar al Estado en general, cualquier usos o disfrutes o beneficios. Al mismo tiempo se señalaba en este informe que *esta Ley se ha dado en la práctica extraordinaria latitud, comprendiendo entre las obras de utilidad pública la de ornato, Se puede menos de entrar en el espíritu de la ley un proyecto dirigido a conservar los venerables despojos de la ciudad, por lo que la publicación en el Boletín Oficial promoviendo el expediente de utilidad pública, demostrará el interés con que mira el Gobierno la gloria nacional.* Finalmente cabe mencionar que no se pudo adquirir las propiedades particulares durante la etapa isabelina.

#### **2.3.4.2. La impronta de la Ley de Minas de 14 de diciembre de 1855 y el Reglamento 6 de julio de 1859 en la configuración del sistema normativo del patrimonio arqueológico.**

La publicación del Reglamento para la ejecución de la Ley de Minas de 6 de julio de 1859 va a suponer un paso trascendental a la hora de configurar la regulación pública de las excavaciones arqueológicas. En el artículo 4º de dicho Reglamento ya se abordaba el procedimiento administrativo que debía realizarse para intervenir en la propiedad de un fundo privado, e incluso la acción limitadora de su derecho de propiedad, en la que se contenía el papel instructor del Gobernador, al disponer que se hiciera la oportuna notificación al dueño del terreno *para que se exponga, como tal dueño, dentro del plazo de quince días, las razones de negar el permiso para la explotación, o manifieste si se obliga a hacerlo por su cuenta*. La negación del dueño del terreno, en un plazo de los quince días, respecto de obligarse o no de hacer la explotación de su cuenta, se entendería su renuncia; y *lo mismo en este caso que de negarse a explotar por sí el terreno de su propiedad, con la explotación de los motivos por los cuales no consiente la explotación de un tercero*, se oirá el parecer del Ingeniero respectivo y del Consejo provincial, remitiéndose el expediente al Ministerio de Fomento para la resolución que se proceda. En el Pleno Municipal de 16 de marzo de 1865 en Cullera se va a tratar de la posible autorización a un vecino del pueblo, Antonio Bou, para poder excavar en el término municipal: *Antonio Bou y Bodi, vecino de Cullera (...) Que la antigüedad de la población, cuyo origen se pierde en la historia de los primitivos fundadores de la España...; ha sido causa de que algunas personas apreciadoras de tan gloriosos antecedentes se dedicasen en todos los tiempos a la búsqueda de antigüedades, depositadas en los restos de torreones y fortalezas del monte inmediato (...). Pero las medallas, los vasos, las ánforas, las inscripciones, los sepulcros, los epitafios y los monumentos de esta naturaleza, han sido después de hallados, objetos de una pasajera y vana curiosidad extraviándose o malbaratándose vilmente, sin que en la actualidad pueda mostrarse ninguno de ellos custodiado por la municipalidad, o por los mismos inventores (...)*. La instancia terminaba solicitando que se autorizara la excavación, por su cuenta y riesgo y con fines altruistas, por lo que el Pleno Municipal dictaminaría, que se accediese a los que los solicitaran los recurrentes con la obligación de cumplir lo que previniera el artículo 7º de la Ley de Minería. En las Actas Municipal del 14 de diciembre de 1855 se daría cuenta de que no habría inconveniente que Antonio Bou lleve adelante sus trabajos siempre que se atempere, para no irrogar perjuicio a tercero, por lo que se establecía una serie de condiciones: la dirección de las excavaciones estarían sometidas al maestro municipal de obras; a abonarles sus dietas, a presentar una fianza de 30.000 reales vellón, a reponer lo revuelto a su prístino estado; y a someterse a la vigilancia de la autoridad local en todo momento y evento<sup>2387</sup>.

---

<sup>2387</sup> APARICIO PEREZ, José; HIS CATALA, Alfredo *Las raíces de Cullera: prehistoria y protohistoria El Museo Arqueológico*. Departamento de Historia Antigua. Facultad de

### 2.3.5. Obras Públicas y Patrimonio Arqueológico: Hacia una tutela de los bienes arqueológicos descubiertos en las obras públicas.

Las continuas obras públicas que se van a ir produciendo durante el periodo isabelino durante este periodo, desde la incorporación de las primeras redes ferroviarias hasta la construcción de carreteras, provocaron la salida a la luz de un amplio número de bienes arqueológico que en muchas ocasiones serían destruidos o vendidos en los mercados fraudulentos. No se puede afirmar la existencia de una regulación precisa sobre esta cuestión, aunque consta como en algunos casos se intentaron por todos los medios salvaguardar a algunos yacimientos arqueológicos, como fue el caso de Itálica, al pretender superponerse el principio de la utilidad pública, en principio la construcción de una carretera nacional, sobre la salvaguarda de un yacimiento arqueológico. El relato de los hechos nos puede ayudar a comprender en qué situación nos vamos a encontrar todavía en los primeros decenios de la etapa isabelina. Tradicionalmente, Itálica había sido objeto de atentados ante la pasividad de las autoridades, por lo que comenzaron a aparecer reacciones de protestas por parte de algunos eruditos como José Amador de los Ríos, al utilizar materiales del inmueble romano para la construcción de una carretera, hecho que fue recogido en un periódico local hispalense en 1855 con el título *Que lo sepa todo el mundo*, lo que ocasionaría un verdadero conflicto institucional entre el director de las excavaciones, el propio José Amador de los Ríos y el ingeniero de caminos que supuestamente dio la autorización, lo que haría intervenir a la propia Diputación Arqueológica de Sevilla. Los términos empleados por Amador de los Ríos no dejan ninguna duda del lamentable hecho: *No sabemos nosotros a quien culpar en el atentado cometido contra unas ruinas tan venerables: hemos oído decir que se destruyen para componer la carretera y también se nos ha dicho que se extraen los sillares por los vecinos del pueblo para labrar casas. Suspendemos aquí nuestro juicio, para ser verdaderamente imparciales, y sólo nos concretamos a llamar seriamente la atención del señor jefe superior político, con el objeto de que ponga término a estas demasías, que nos hacen aparecer a la vista de los extraños como una nación de vándalos*<sup>2388</sup>. Se elaboró un informe de lo sucesivo bajo los auspicios del propio gobernador civil, Mariano Castillo, que quedaría reflejada en el acta de 5 de diciembre de 1855. Sin embargo, paradójicamente el asunto no llegaría a más, atribuyéndose a un descuido ocasional del ingeniero, culpando a los trabajadores que habían ejecutado la orden de recoger los materiales. Posteriormente, la Real Academia de la Historia envió un **Oficio el 24 de noviembre de 1856** en el que se comunica que el Gobierno procederá con una Real Orden comunicando al Gobernador Civil de Sevilla para que sea salvada las ruinas de Itálica. En algunos fragmentos de la exposición nos encontramos ya la nueva realidad que se iba

Filosofía y Letras, Universidad de Valencia, Sección Arqueológica, Núm.3. Valencia, 1977, pp.10-11.

<sup>2388</sup> El texto está publicado en Itálica Arqueológica, p.46.



cuajando en el ámbito de la tutela jurídica por parte de las instancias gubernativa al asumir algunas obligaciones como el *nombramiento de un comisionado especial que practicando un escrupuloso reconocimiento de las ruinas, haga constar sus deterioros y estado actual, y proponga lo que juzgue oportuno para exigir la responsabilidad a los culpables de las destrucciones y los medios no solo de evitarlas en lo sucesivo, sino de poner tan interesante antigüedad completamente a cubierto de nuevas profanaciones.*

En el **Oficio de la Diputación Arqueológica de Sevilla del 24 de diciembre de 1856** se daba cuenta de los daños causados en las ruinas de Itálica, en el que se enunciaba los daños cometidos en los inmuebles, entre los que se refería: *1º. Que junto a la extremidad este del anfiteatro se había hecho una excavación o desmonte de los trozos (...) extrayendo el material de manera que los inferiores quedan expuestos a hundirse; siendo este la mayor destrucción y existiendo aun en ellas multitud de cargas de cascotes; 2º. Que entra ésta y la parte Norte del eje menor del anfiteatro, había otras excavaciones cubiertas en parte con tierra movediza y ripiaje menudo (...); 4º. Que conforme se entra desde la carretera, había un corte a pico, hecho en un trozo de bóveda, lo que se conocía a larga distancia por la blancura del hormigón quedando al pie de dicho corte vestigios de haber triturado cascotes; 5º. Que fuera del anfiteatro y las termas que llaman los baños, estaban cubiertos de cascotes por todas partes removidas y escavadas por multitud de lados y picado los arranques de algunas bóvedas y 6º. Finalmente, las termas llamadas el palacio, tenían multitud de ladrillos picados y cascotes reunidos, lo que se averiguó procedió del año pasado) y se instigaba a realizar un informe judicial en toda regla a fin de que resplandezca la verdad sobre el mezquino interés y las pasiones no se lastime la honra de esta Diputación y se salven de una vez para siempre las infortunadas ruinas con la represión enérgica de sus bárbaros destructores (...) al Gobierno de S.M. toca averiguar los hechos y sus autores, quedando a esta sociedad la satisfacción de haber (...) sido en denunciar ahora lo que ésta firme en sostener a toda costa.* A raíz de este hecho se estableció un verdadero plan de excavaciones bajo el ímpetu de Demetrio de los Ríos que fue nombrado director de las excavaciones en 1860, que había ganado la plaza de arquitecto municipal. Se considera que podemos hablar ya de una verdadera actuación científica sobre el yacimiento, aunque desgraciadamente quedaría truncado por los avatares políticos que ocasionarían el final de la monarquía.

Uno de los problemas trascendentales para la tutela pública de los bienes arqueológicos de esta etapa va a ser el régimen de dominio de aquellos que habían sido descubiertos en obras públicas. Se conoce un gran número de casos durante esta etapa que debían ser informados a la Real Academia de la Historia, pero que en la misma medida no se podía dar una respuesta inminente al carecerse de una verdadera ley de antigüedades. En el Oficio de remisión de 19 de mayo de 1859 de un oficio enviado al Ministro de Fomento por el Gobernador Civil de Tarragona se especificaba que la Reina había enviado dos órdenes al Gobernador de Tarragona (el 15-4-59 y el 10-5-59) para que se

cuidase de los nuevos hallazgos hechos en la Rambla Nueva de Tarragona. El Ministro, por su parte pediría a la Real Academia de la Historia que emitiera su parecer sobre lo que debía hacerse de ahora en adelante en lo relativo a la propiedad de los objetos encontrados en excavación, ya sea en terreno público como privado, especificándose que si haciéndose varias obras públicas por cuenta del Estado y apareciendo en ellas preciosos restos arqueológicos, han podido y si debe cuidar éste de que no se extravíe y de que antes por el contrario, vayan a los Depósitos que al efecto la Nación tiene establecidos (2º), cuáles serían las instrucciones convendrían dar, y que obligaciones (3º); Qué medidas convendrían adoptar para que no se extravíen los objetos antiguos hallados en terreno público y privado (4º) y qué convendría resolver, respecto a las propiedades de los mismos, en virtud de la indicación que hace el Inspector de Tarragona (5º). En un caso parecido, como fue el descubrimiento notificado por Sanajuana, Inspector de Antigüedades de Tarragona, de una construcción abovedada en las obras de las Ramblas de Tarragona, la Real Academia de la Historia emitiría un Informe el 8 de febrero de 1862, expresando una vez más las limitaciones que el derecho absoluto de la propiedad privada suponían a la hora de promulgar una ley de antigüedades, como aparece reflejado en estos términos: (...) *el Sr. Gobernador de la provincia, ha dispuesto se deposite lo que pueda encontrarse, puesto que no está autorizado para la expropiación y consulta que como la abertura circular pasa muy cerca de la calle o rambla en proyecto y como uno de los ramales lo atraviesa, si tiene en consecuencia el Estado derechos a participación a los referidos restos, pudiendo abrir entradas y considerarse en lo sucesivo como monumento público no impidiendo como no impide a los particulares propietarios del terreno que pueda levantar edificios con entera independencia. Pero si continuamos la lectura podemos contemplar la verdadera esencia del problema que seguía sin resolverse en el caso de bienes arqueológicos de dominio privado, por lo que se subrayaba que la contestación que podía darse a la cuestión planteada debía ser más bien arreglada a los principios del derecho constituido que al interés arqueológico que el descubrimiento implique, especificando como una en los casos de extracción de bienes arqueológicos al extranjero estaba ya aclarada, y del derecho que el Estado tiene de adquirirlos previa indemnización cuando sean inventados por los particulares en terrenos de su propiedad, incluso estaba resuelto acerca de la propiedad de dichos objetos cuando se encuentren en terrenos de propiedad común o del Estado, y la parte que debe reservarse para el que lo descubra (...), aunque no estaba claro en los casos de extracción por obra pública.*

Cabe mencionar finalmente la iniciativa de la propia Real Academia de la Historia a la hora de intentar salvaguardar los restos arqueológicos que surgían por motivos de las distintas obras públicas que se fueron desarrollando durante estos años. Y es que el académico Salustiano de Olózaga elaboró un proyecto presentado en la Junta el 5 de febrero de 1858, con el fin de otorgar unos premios concedido por la Real Academia de la Historia, estimulando de esta manera a los ingenieros de las obras públicas a la colaboración de la

conservación del patrimonio arqueológico. Como apunta Maier el proyecto, pretendía aunar progreso y arqueología, en un momento en que se observa un incremento notable de las obras públicas, por lo que el espíritu del mismo planteaba tomar la antigua red de caminos romanos como modelo para trazar el recorrido de los ferrocarriles, produciéndose un beneficio claro en ambas direcciones, esto es, tanto para el trazado que habrían de seguir éstos como para aprovechar los movimientos de tierras que se generarían y poder así estudiar los antiguos. Se designaría una primera Comisión formada por Modesto Lafuente y Aureliano Fernández-Guerra, siendo finalmente aprobado el proyecto definitivo en la Junta de 30 de abril de 1858. Los premios permanecerían en vigencia hasta 1873, llegando su punto más álgido entre los años 1859-1861, aunque todavía en 1862 sería premiado el ingeniero Eduardo Saavedra, descubridor de Numancia, que llegaría a ser nombrado Presidente de la Real Academia de la Historia<sup>2389</sup>.

A finales de la etapa isabelina se va comenzar a incrementar una política de protección de yacimientos arqueológicos que estuviesen afectadas por obras públicas, regulando especialmente el destino de aquellos bienes arqueológicos que se hubiesen descubiertos. **En el Oficio de 7 de mayo de 1868 de la Real Academia de la Historia** sería comunicada la aparición de restos de edificaciones durante las obras de reforma de la carretera de Granada a Pinos Puentes, así como de las medidas adoptadas sobre los bienes arqueológicos descubiertos en virtud de lo prevenido en el artículo 17 del Reglamento de 1866, *acudir a este Sr. Gobernador, solicitando la debida intervención, en dichos trabajos para evitar la pérdida o sustracción de los restos artísticos o arqueológicos que puedan descubrirse y ha nombrado también para que ejerza esta inspección y redacte, en su caso la historia del descubrimiento, al Sr. Coronel Don Pedro Lagarza, Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, que se ha brindado generosamente a prestar este servicio*

### **2.3.6. La concesión de asignación presupuestaria del Ministerio de Instrucción Pública a la Real Academia de la Historia para realizar excavaciones arqueológicas.**

Uno de los puntos vitales en la iniciativa pública de la tutela del patrimonio arqueológico sería la asignación presupuestaria que concedería el Ministerio de Instrucción Pública a la Real Academia de la Historia, con el fin de que pudiera realizar excavaciones arqueológicas. El caso más significativo fue la asignación presupuestaria concedida a las excavaciones de Numancia, por el que se dotaba a la Real Academia de la Historia según el **Informe interno de la Real Academia de la Historia del 19 de mayo de 1854** de diez mil reales de vellón para continuar las excavaciones de Numancia, que le

---

<sup>2389</sup> MAIER ALLENDE, Jorge, 2000, pp.42-43.

fueron concedido, pero unos años después a instancia del Oficio de 12 de junio de 1861 sería solicitada la devolución a la Tesorería del Ministerio de Fomento de 10.000 reales concedidos mediante Real orden de 1854 para las excavaciones de Numancia, al haber transcurrido siete años sin presentar las cuentas de dicha inversión, tal como así constaba en la ley de Contabilidad vigente, por lo que quedaba expresado que *a todo libramiento que se expida contra la Caja del Tesoro para satisfacer obligaciones del servicio público deben acompañar los justificantes de la inversión de la suma librada*, precisando que había casos en que la naturaleza de los gastos exigía *ylas leyes e instrucciones vigentes autorizan, que se libren en suspenso, o sea anticipadamente, para alguna atención. Pero en tales casos, son circunstancias indispensables: primero, que antes del 31 de diciembre del año en que se ha expedido el libramiento se ejecuten los gastos, y segunda, que antes del 30 de junio siguiente, es decir, dentro de los seis meses de ampliación que el artículo veinte y dos de la ley de contabilidad concede para la liquidación y pago de los servicios hechos en cada año quede formalizado el libramiento en suspenso con la cuenta debidamente justificada de su inversión, o con el reintegro en otro caso de su importe sino se hubiera invertido en el plazo antedicho. Con arreglo, pues, a estos principios, no habiéndose presentado todavía al cabo de siete años la cuenta de la inversión de los diez mil reales librados, en 30 de agosto de 1854 a Don Manuel Fermín Garrido, habilitado de la Real Academia de la Historia, para excavaciones en la provincia de Soria, es indispensable que inmediatamente se verifique el reintegro de dicha cantidad en la Tesorería Central, y se remita a esta Ordenación copia debidamente autorizada de la carta del pago que a favor de dicho habilitado expida aquella dependencia, a fin de satisfacer con ella el reparo del Tribunal*. Paradójicamente se volvería a solicitar una nueva subvención tal como consta en la **Minuta de oficio del 2 de julio de 1861** por el mismo importe, concretamente 10.000 reales para proseguir realizando excavaciones en Garray, Numancia, al haber sido devuelta siguiendo instrucciones del Ministerio de Fomento una cantidad similar concedida en 1854 por idéntico fin, estando en este tiempo encargado por la Real Academia de la Historia, Don Eduardo Saavedra, ingeniero jefe de segunda clase y profesor de la Escuela Superior de Caminos, Canales y Puertos, quien *llevadosolo de su afición a las antigüedades, emprendió a su costa en 1854 las excavaciones de que se trata*, por lo que se volvía a solicitar *disponer que se libren de nuevo a favor de la Academia, la cantidad de diez mil reales para continuar las excavaciones*. Unos días después se recibiría un Oficio de 21 de julio de 1861 de la Dirección General de Instrucción Pública en el que se comunicaba la concesión de 10.000 reales para continuar las excavaciones previstas por la Real Academia de la Historia en Numancia, al mismo tiempo que sería recibida un **Oficio de 2 de agosto de 1861** la Ordenación General de pagos en el que se comunicaba el libramiento, a favor de la Real Academia de la Historia, de la cantidad de 10.000 reales para llevar a cabo excavaciones en Numancia. Finalmente, por la **Real Orden de 14 de agosto de 1862** se autoriza el libramiento de 25.000 reales, de los 50.000 consignados en el presupuesto, para que la Real Academia de la Historia prosiga sus excavaciones en Numancia. La

conservación de Itálica se convierte en uno de los objetos primordiales de la tutela pública durante la etapa isabelina, por lo que se puede apreciar como en la propia elaboración del presupuesto de la Comisión de 1847 se consignaba 20.000 reales en la Sección de Arqueología exclusivamente para la ciudad romana, con el fin de *continuar alguna vez con utilidad pública las excavaciones de Itálica que están en total abandono y proveer a su conservación*. La iniciativa de Demetrio de los Ríos a partir de 1860, Itálica conocería uno de sus avances más espectaculares en el siglo XIX a nivel de intervención, con un presupuesto inicial de 10.000 reales, que se incrementaría con 10.000 reales de vellón más donativo de la propia Reina en 1862, con motivo de la visita que realizó al yacimiento. En febrero de 1867 sería otorgado por el Ministerio de Fomento 8.000 escudos para que se continuara los trabajos en el anfiteatro, con la limpieza del mismo, e incluso la adquisición de tierras adyacentes que pudiera permitir proseguir las investigaciones.

### **2.3.7. La institucionalización del coleccionismo público del Patrimonio Arqueológico: la fundación del Museo Arqueológico Nacional y los museos provinciales arqueológicos.**

Durante la etapa isabelina el coleccionismo público se institucionaliza el coleccionismo público de los bienes arqueológicos produciendo dos hechos trascendentales: 1º) La creación del Museo Arqueológico Nacional a raíz del decreto de 20 de marzo de 1867 y 2º) La incorporación de una red de museos arqueológicos provinciales a raíz del artículo 5 del decreto de 20 de marzo de 1867. La divulgación del Patrimonio Arqueológico daría lugar a la aparición de los llamados museos arqueológicos, que superaba la concepción museística de tiempos anteriores de ser simples depósitos de objetos artísticos y de antigüedades. Con el **Reglamento de 24 de noviembre de 1865** se comenzaría a distinguir en el ámbito museísticos, los llamados museos de bellas artes y museos de antigüedades, que a la vez sucesivamente se irían denominando arqueológicos. No cabe duda que en este Reglamento ya podemos encontrar un paso primordial en la custodia de los bienes nacionales de interés histórico-artístico y arqueológicos, donde ya aparecía el cargo de conservador, aunque de manera muy diluida, e incluso la elaboración de la catálogos e inventarios que ayudaban a un mejor conocimiento público del patrimonio monumental. En el capítulo cuarto del Reglamento de 1865 estaría dedicado a los museos provinciales, distinguiéndose entre los de bellas artes y los arqueológicos. Al mismo tiempo los museos debían de formarse a través de adquisiciones, bien como consecuencia de las medidas desamortizadoras, o bien por los habituales medios de adquisición como excavaciones, compras o donaciones. En el artículo 33 se especificaba como cada museo se debía de poner bajo el cuidado de un individuo de la comisión provincial que nuevamente es designado con el término de conservador, aunque no era un cargo puramente técnico ya que



todavía era desempeñado por un miembro de la comisión, sin ningún tipo de remuneración.

Con el **Real Decreto de 20 de marzo de 1867** nacería el Museo Arqueológico Nacional<sup>2390</sup>, junto con los Museos Arqueológicos Provinciales. Desde finales de 1862 se había ido concibiendo la idea de levantar un Museo, por lo que se decidió levantar en un solar de propiedad estatal al final del Paseo de Recoletos, un gran edificio titulado Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales, destinados a cobijar la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Pinturas y Esculturas de la Trinidad, y el aún no creado Museo Arqueológico Nacional. En la reflexión que realizaría Alejandro Marco Pous sobre el Real Decreto fundacional llama la atención en primer lugar el elevado estilo de la prosa ministerial, en contraste con el conciso de la parte dispositiva que es el normal en tales casos. Dentro de la casi sublime retórica de la exposición de motivos se esconde una gran cantidad de conceptos sobre los fines, o utilidad, de los Museos en general y del Arqueológico Nacional en particular. En la exposición de motivos se late ya la iniciativa estatal de tutela de un patrimonio arqueológico que está empezando a dársele un papel trascendental para el conocimiento de la historia nacional. El texto sería probablemente obra de Severo Catalina de Amo, Director General de Instrucción Pública, que contaría probablemente con la colaboración de José Amador de los Ríos. En su artículo 1º se establecía las pautas de su creación: *Se establecerá en Madrid un Museo Arqueológico Nacional. Se formarán Museo Provinciales de la misma clase en aquellas provincias en que se conserven numerosos e importantes objetos arqueológicos. En las demás se crearán colecciones con los objetos que se vayan reuniendo.* En el artículo 2º se perfilaba la concepción del bien arqueológico distinto de los bienes históricos-artísticos fundamentado en la etapa histórica a la que perteneciera: *Se considerarán objetos arqueológicos para los fines de este decreto todos los pertenecientes a la antigüedad, a los tiempos medios y al renacimiento, que sirvan para esclarecer el estudio de la historia, del arte o de la industria en las indicadas épocas. Se exceptúan los que por su índole deben corresponder a los Museos de pinturas (art.2º).* A partir de este momento se daría una verdadera separación entre los museos arqueológicos y los de bellas artes, e incluso los conservadores de unos u otros. Siguiendo a Bolaños *en este tipo de museos se valoraba la cualidad histórica de los objetos, de la idea de hallazgos de tesoros, recogidos en metódicas excavaciones científicas, sin estar presente ningún tipo de valoración estética, quedando excluidos de este ámbito las obras de arte de los museos de pintura*<sup>2391</sup>. El decreto de marzo de 1867 también aportaría una importante novedad en la organización administrativa: la de crear la figura del anticuario, el cuerpo facultativo de los museos arqueológicos, que serían definidos como *conservadores peritos en el difícil arte de clasificar, interrogar e interpretar el testimonio, mudo, pero tan luminoso como irrecusable, que*

<sup>2390</sup> El decreto se publicó con gran solemnidad en el nº 80 de la Gaceta de Madrid del jueves 21 de marzo de 1867. *Museo Arqueológico Nacional: de gabinete a Museo.* Madrid, 1993.

<sup>2391</sup> BOLAÑOS, M. *Historia de los museos en España.* Gijón, 1997, p.223.

*prestan las medallas y monedas, los monumentos y los objetos de las industria y el arte que pasaron.*

El carácter público del Museo Arqueológico Nacional está plenamente presente en todo el articulado del decreto, precisando como los bienes que lo forman son de propiedad estatal: *Los que sean o fueren en lo sucesivo propiedad del Estado* (art.3.4º), al mismo tiempo que todavía se vislumbra un claro respeto a la propiedad privada e incluso a instituciones públicas de carácter cultural: *Los conocidos en el día y custodiados por corporaciones públicas científicas o literarias no pasarán al Museo sino mediante consentimiento de éstas* (art.3.4º). La adquisición de piezas arqueológicas por parte del recién creado Museo Nacional fue uno de los problemas más acentuado desde la propia génesis. En un principio se inició con las colecciones fundacionales, formadas por todos los objetos arqueológicos y numismáticos que existen en la Biblioteca Nacional (art.3º.1.), los que custodian en el Museo de Ciencias Naturales (art.3º.2) y los existentes en la Escuela Especial de Diplomática (art.3º.3.). Al mismo tiempo el Museo recurrió a varios procedimientos para la ampliación de sus fondos, por lo que el Museo va a comportarse como un propietario más que adquiere para su propiedad todo tipo de piezas arqueológicas, pero la cuestión primordial estribaba en que carecía de dinero para ello, mientras que comerciantes de antigüedades, nacionales y extranjeros, adquirirían piezas valiosas por toda España, por lo que no quedaría más solución que pedir objetos a algunas instituciones que se consideraban que lo podrían tener, por lo que en el Decreto fundacional se instaba, aunque no se obligaba, que la Real Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando, dieran piezas al Museo Arqueológico Nacional, por lo que al no haberse efectuado en principio ninguna donación, por lo que sería promulgada **la Real Orden de 6 de noviembre de 1867**, donde se solicitaría a las Comisiones Provinciales de Monumentos, Academias de Buenas Letras, Sociedades Arqueológicas y demás corporaciones que poseyeran este tipo de bienes que lo cediesen al Museo Nacional, bien por donativo o por depósito, un ejemplar de los objetos dobles que poseyera o aquellos que no fuera de gran importancia para la historia de la provincia. Se conoce de esta manera que el obispo de Córdoba donó setenta y siete objetos, a los que se unirían otros eruditos particulares como Luis Maraver, Pérez de Siles, etc. Por Real Orden de 21 de abril de 1868 el Ministerio de la Guerra entregó al Museo Arqueológico Nacional una serie de objetos que se habían descubierto en el cerro del Cortijo de Casablanca (Espejo), en el curso de unas excavaciones realizadas hacia 1865 por una Comisión del Cuerpo del Estado Mayor del Ejército. El contenido de la Real Orden del 6 de noviembre de 1867 está reproducida en la Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológico de 1867, pp.105-109.

El **9 de junio de 1868** se vuelve a reiterar la petición mediante otra Orden circular. La Academia de Bellas Artes cedería en depósitos algunas piezas<sup>2392</sup>. Además desde 1868 se comisionaría a facultativos y ayudantes para que recorriera las provincias españolas, contando con la colaboración de las Comisiones Provinciales de Monumentos. Las realizadas en Andalucía serían recorridas las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada, que incluso llegaron a promover excavaciones. Cuando el Museo Arqueológico Nacional estaba a punto de ser inaugurado, estallaría la Revolución de 1868. Con la finalidad de obtener nuevas piezas, unos meses más tarde, saldría publicado la **Real Orden Circular de 6 de noviembre de 1867**, que reglamentaba no solo la conservación de los objetos arqueológicos, sino el aumento del Museo Central establecido en Madrid. En el artículo 4º se especificaba la identidad pública de los bienes que iban a formar parte de la colección: *los que sean o fueren en lo sucesivo propiedad del Estado*, un paso excepcional para convertirlos posteriormente en bienes de dominio público, aunque añadiría el límite de *los conocidos en el día y custodiados por corporaciones públicas científicas o literarias no pasarán al Museo sino mediante el consentimiento de estas*. Al mismo tiempo precisa una diferenciación a la hora de adquirir las piezas arqueológicas que enriquezca el nuevo Museo Central, al distinguir aquellos que en principio estaría bajo la titularidad pública de los que estarían en el ámbito de la propiedad privada. En el primer caso se convocaría a Junta Extraordinaria a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de cada provincia y la invitaría a que cediera al Museo Arqueológico Nacional, bien por donativo, bien mediante un depósito voluntario, un ejemplar de los objetos dobles que poseyera, o aquellos que sin ser de gran importancia para la historia de la provincia o del municipio, pudiera ser de utilidad en el Museo Central. Siguiendo los términos de la ley, *igual invitación dirigirá V.S. a las Academias de Buenas Letras, Sociedades Arqueológicas y demás corporaciones que posean objetos de antigüedades*. En el caso de que los bienes arqueológicos estuviesen en manos privadas, *se cuidaría que iguales invitaciones se dirijan a los particulares que posean colecciones arqueológicas más o menos numerosas, o cualquier objeto interesante bajo el punto de vista de la historia del arte antiguo*. Cada dos meses se remitirá al Ministerio una nota especificada de cuanto se haya gestionado y conseguido en cada provincia. Como premio a todo el que se prestara a favorecer el enriquecimiento del Museo se le concedería honrosas distinciones. Se comisionaría a facultativos y ayudantes del Museo Arqueológico Nacional para que recorriesen las provincias españolas, colaborando con las Comisiones Provinciales, que facilitarían información sobre eventuales donaciones o ventas por parte de propietarios de obras de artes, tanto de instituciones como de

<sup>2392</sup> MARCOS POUS, Alejandro, "Origen y desarrollo del Museo Arqueológico Nacional", en *De Gabinete a Museo. Tres siglos de historia*, Madrid, 1993, pp.45-46.

particulares<sup>2393</sup>. No cabe duda que se estaban dando pasos sustanciales en la tutela pública del Patrimonio Arqueológico. La colección del nuevo Museo Arqueológico Nacional estará formada por las antigüedades atesoradas por los Reyes españoles y que se encontraban depositadas en la Biblioteca Nacional, fundada en 1826, entre los que sumaban setecientos objetos egipcios, grecorromanos y medievales, destacando los restos procedentes de las excavaciones que Carlos III había realizado en Pompeya y Herculano, a las que se unirían otras colecciones de procedencia privada, como los fondos que se habían custodiados en el Museo de Ciencias Naturales, de la originaria colección Dávila. Sin embargo, cuando ya se iba a inaugurar el Museo, estallaría la Revolución de 1868, por lo que se tendría que posponer su apertura<sup>2394</sup>. En la citada ley se creaba la figura de corresponsal del Museo Nacional de Antigüedades, que tendría como finalidad poner a su cuidado la designación y adquisición de los Monumentos según la ley del 20 de marzo del año último -1868- y deben contribuir al aumento de este Central Instituto, como propiedad del Estado. Al nombramiento de José Puiggardí como corresponsal en Barcelona el 8 de agosto de 1868, se uniría otros nombres por toda la geografía española. Otra institución nacida en el seno de la ley sería las Comisiones Científicas del Museo Arqueológico Nacional cuya finalidad era recorrer diversas provincias *así para estudiar monumentos, como para adquirir objetos con destino al Museo, no por medio de incautaciones, que éstas han sido comisiones distintas y desempeñadas y desempeñadas por otras personas encargadas de ellas, sino por medio de trabajos propios de compras, cambios y donaciones*. Como apunta Angela Franco Mata estas Comisiones tendrían unos resultados esplendidos, a pesar de haber sido con escasísimos medios.

En el capítulo IV del Reglamento del 24 de noviembre de 1865, por el que se regulaba el funcionamiento de las Comisiones de Monumentos, se refiere ya directamente en su capítulo IV a la protección de las Antigüedades, a la hora de configurar los museos provinciales, que se formarían con los fondos provenientes de los edificios enajenados; b) Objetos procedentes de las excavaciones realizadas en presupuestos provinciales (...). Sería con el Real decreto de 20 de marzo de 1867 que había creado el Museo Arqueológico Nacional, cuando se va a disponer la fundación de los llamados museos provinciales. En el artículo 5º se disponía que los Museos provinciales existentes y los que se crearan, conservaran los objetos arqueológicos pertenecientes a la provincia respectiva. En los casos que no tuviera museos se crearían colecciones con los objetos que se fueran reuniendo. Los nuevos Museos serían instalados *en el mismo edificio donde se halle la Biblioteca Pública o el Archivo Histórico, si fuera posible, y en todo caso en local adecuado y conveniente*.

---

<sup>2393</sup> FRANCO MATA, Angela “Comisiones Científicas en España desde 1868 a 1875” en POUS Marcos, *De Gabinete a Museo. Tres siglos de historia*. Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Arqueológico Nacional, Abril-Mayo, 1993, p.300.

<sup>2394</sup> BOLAÑOS, pp.246-247.

Lo mismo se hará con las colecciones que por su escasa importancia relativa no llegue todavía a formar Museo. Las Comisiones Provinciales de Monumentos entregaría a los Museos Provinciales los objetos arqueológicos que tuvieran en este momento y los que en adelante tuvieran (art.5º). Las Comisiones de Monumentos contemplaban la posibilidad de realizar excavaciones arqueológicas, siendo necesaria una autorización que era concedida primero por el Gobierno y posteriormente por la Academia de Historia<sup>2395</sup>. Con la creación del Museo Arqueológico Nacional se estableció como obligación de enviar los objetos más relevantes desde las provincias, aunque en el caso sevillano no consta que se hiciese al estipularse que no había ninguna pieza digna del Museo Nacional. No obstante, se va a estimular en estos años las donaciones de bienes arqueológicos, como fue el caso de Manuel González Reynoso que en 1852 que donaría una inscripción romana hallada en la ruina de Itálica, o Don Vicente Fernández, vecino de Santiponce, que cedía a la Comisión para enriquecer su Museo Arqueológico una estatua de piedra sin cabeza hallada arando por sus mozos de labor al sitio de los Palacios. La adquisición de bienes arqueológicos por compras fue muy escasa debido a la falta de fondos<sup>2396</sup>.

Una primera red de museos arqueológicos provinciales irían surgiendo en todo el ámbito peninsular: Tarragona, Sevilla, Barcelona, Granada, Córdoba, León, Huesca y Valladolid, que estarían formados por las colecciones arqueológicas que ya habían existidos anteriormente, sumándose a los descubrimientos recientes. El más antiguo de los Museos Provinciales sería el de Tarragona, teniendo como antecedente la Sociedad Arqueológica Tarraconense, cuyo Reglamento data del 6 de octubre de 1844, en cuyo artículo 1º se establecía como objetivo primordial del mismo era el carácter didáctico del patrimonio: *el principal objeto de esta sociedad es reunir en el Museo todo el número posible de fragmentos, monedas, medallas y demás documentos históricos, dignos de aprecio hallados en esta Provincia, bien pertenezcan a la antigüedad o a la edad media; atender a su conservación y fomento, y propagar en la juventud, por todos los medios que estén a su alcance, la afición al estudio de nuestras antigüedades, que, cual luminosa antorcha, nos descubren la civilización de nuestros antepasados y las glorias de nuestro privilegiado país*<sup>2397</sup>. La fundación del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla va a suponer un nuevo foco de divulgación cultural en el ámbito local,

<sup>2395</sup> HERNANDEZ HERNANDEZ, Francisca; DE FRUTOS GONZÁLEZ, Esther “Arqueología y Museología: La génesis de los museos arqueológicos” en MORA, Gloria; DIAZ ANDREU, Margarita (Coord.) *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*. Málaga, 1997. pp.145-146.

<sup>2396</sup> LARA ESCOZ, José Ignacio “La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Sevilla en el siglo XIX. Una perspectiva arqueológica”, en DEAMOS, Belén; BELTRAN FORTES, José (editores) *Las instituciones en el origen y desarrollo de la arqueología en España*, Spal Monografías X, Sevilla, 2007pp.85-86.

<sup>2397</sup> TORTOSA; MORA, 1996, pp.204-205.



al mismo tiempo que fue adquiriendo un gran número de objetos encontrados en excavaciones, hallazgos fortuitos o incluso provenientes de colecciones privadas. Sin embargo, un gran número de provincias quedaron exentas de estos museos, dejando en entredicho nuevamente la aplicación de la disposición general. Y es que el escaso interés que tuvo en principio la fundación de los museos contribuyó a que no existiese un ambiente social favorable hacia la conservación del patrimonio, por lo que no se pudo frenar los continuos expolios de los objetos arqueológicos que se estaban produciendo en estos años. Araujo en 1868 en su artículo *Los Museos provinciales de España* publicada en la Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológico señalaría la inutilidad que podían tener estas instituciones, y señalando al mismo tiempo la dificultad que tenían las Comisiones Provinciales de Monumentos a la hora de catalogar las obras<sup>2398</sup>. Como resalta Trinidad Tortosa y Gloria Mora, estas instituciones, además del avance científico que supusieron, introdujeron una nueva perspectiva ya que las antigüedades dejaban de estar solamente en los gabinetes de eruditos y coleccionistas, para ampliarse su repercusión al público en general, por lo que la idea de utilidad, unida al término antigüedades, adquiere una nueva dimensión, en cuanto que a partir de este momento va unido a la enseñanza y a la divulgación.

#### **2.4. El sistema sancionador de los delitos contra la Propiedad Monumental en la España Isabelina: el Código Penal de 1848.**

##### **2.4.1. La tipificación del delito contra el Patrimonio Arqueológico en el Código Penal de 1848.**

En la década moderada se promulgó el Código Penal de 1848, claramente imbuida del espíritu individualista que presidiría todas las codificaciones del momento, donde se observa en las tipificaciones de los delitos una clara defensa al monumento público, símbolo de la nueva instrumentalización política y cultural de la nueva sociedad burguesa surgida a raíz de la incipiente industrialización surgida en estos años. Aunque no tiene una radical diferencia con el Código de 1822 y el Proyecto de 1833, el artículo 200 del nuevo Código se ubicaría en el capítulo dedicado a los desórdenes públicos y no el relativo a los daños, como en el Código anterior. La tipicidad basada en aquella conducta que llevara a destruir o deteriorar pinturas, estatuas u otros monumentos públicos de utilidad u ornato, penalizada con prisión correccional que iba de seis meses a tres años. El artículo 200 del Código Español de 1848 estaría en relación con el artículo 257 del Código Penal francés de 1832, en cuanto a su objeto material, toda vez que no solo comprendía las obras de arte sino también los monumentos públicos<sup>2399</sup>.

---

<sup>2398</sup> ARAUJO SANCHEZ C. "Los Museos provinciales de España" *Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica*, 1868, pp.353-357.

<sup>2399</sup> GUISALOLA LERMA, Cristina, 2001, pp.45-46.

Se había configurado un nuevo bien jurídico con tutela penal: el monumento público de utilidad u ornato, que lo recoge la propia doctrina, como es el caso de Viada y Villesca que en 1870 ya puntualizaría: *Los monumentos públicos de utilidad u ornato están bajo la salvaguardia de todos los ciudadanos; son el embellecimientos de nuestras ciudades; recuerdan la grandeza de los pueblos que nos han precedido, el genio de sus artistas y la magnificencia de sus soberanos; pertenecen a los siglos futuros como al tiempo presente, constituyen la propiedad de todas las edades... Por eso debe desplegar la ley toda su severidad contra las sacrílegas manos que osaren mutilar, deteriorar o destruir esas bellas creaciones del genio, protegiendo igualmente los preciosos vestigios de la antigüedad y los monumentos de los tiempos modernos, e impidiendo esos actos de vandalismo y de devastación que por tanto tiempo asolaron nuestras comarcas*<sup>2400</sup>. Algunos autores como Pacheco estimarían corta la extensión de la prisión correccional, ya que se contemplaba la importancia del bien jurídico a proteger: *Entre el hecho de degradar una estatua de cualquier escultor adocenado y el de destruir otra de Montañés, de Benvenuto Cellini, de Álvarez; entre desgarrar un lienzo de feria, o borrar un cuadro de Velázquez o de Murillo, no parece que haya más distancia que de los siete meses a los tres años, términos extremos de la prisión correccional. Si bien la pena de este artículo no debió ser nunca mayor, pero sí menor de lo que él mismo establece*<sup>2401</sup>. Al mismo tiempo, el Código de 1848 también tipificaría los daños contra los archivos, castigado con prisión menor en el artículo 464.5, e incluso se incluía en el capítulo dedicado a los incendios y otros estragos el delito cometido contra el archivo general del Estado (464.5). El Código Penal de 1848 sería inmediatamente reformado, por lo que se publicaría una nueva edición oficial en un Decreto de 30 de junio de 1850, aunque en el ámbito de la protección penal del Patrimonio Monumental no cambiaría<sup>2402</sup>.

#### **2.4.2. Una sentencia judicial limitando el derecho de la propiedad privada de los bienes arqueológicos: La sentencia de 1846.**

El hallazgo de un mosaico en unas casas particulares de la ciudad de Mérida en 1844 derivó en una cuestión jurídica que implicaba el debate inherente de la propiedad del bien descubierto y la tutela de la conservación del mismo. El propio Larra recogió el asunto en uno de sus polémicos artículos en la que criticaba la mala gestión institucional que existía en relación al Patrimonio Monumental en España en este momento, y los escasos gastos presupuestarios para su conservación. La pluma de Larra narra el acontecimiento del descubrimiento y la actitud del propietario del terreno donde se ha descubierto con picardía: *La autoridad de Mérida parece haber dado convenientemente al Gobierno, pero no habiéndose dispuesto nada todavía, el dueño de la casa reclama que se le deje usar de su terreno como mejor le convenga o que se*

<sup>2400</sup> VIADA Y VILASECA, S: *Código penal reformado de 1870. Concordado y comentado*. Barcelona, 1874, p.391.

<sup>2401</sup> PACHECO, H. *El Código Penal concordado y comentado*, 4ª edición, tomo II, Madrid, 1870, p.235.

<sup>2402</sup> GUISALOLA LERMA, Cristina, 2001, p.47.

*le compre; en el ínterin, no habiendo fondos destinados a continuar esta importante excavación, y habiendo quedado a la intemperie el pavimento descubierto hasta el presente, el polvo, el agua llovediza y el desmoronamiento de la tierra circundante, echa a perder diariamente el peregrino hallazgo, lleno ya de quebraduras y lagunas; sin embargo, bastaría una cantidad muy pequeña para construir un cobertizo y comprar la choza, ya que no fuese para continuar la excavación*<sup>2403</sup>. Se sabe por las crónicas de la época, que las autoridades municipales le impondría al dueño de la casa donde se encontró el mosaico su conservación e incluso de enseñarlo a todo los que quisieran verlo. Precisamente un personaje llamado Andrés Merino, irrumpió en la localidad de Mérida, queriendo contemplar al mosaico proponiendo al propio dueño y a otros individuos, la extracción del mismo, con el engaño que debajo del mismo había riquezas incalculables. Se estableció unos acuerdos entre ellos de reparto de las riquezas que se descubrieran.

Sin embargo, la operación falló ya que sería denunciado por algunos vecinos. El Alcalde y el Juez interino de Primera Instancia de Mérida abrirían una causa criminal, para lo que se mandó la elaboración de un informe técnico sobre los hechos y el estado en que había quedado el mosaico. A su vez se fueron produciendo las declaraciones de los implicados, entre ellos el dueño de la propiedad, Pedro Galván y el propio envaucador. De esta manera ante el propio Sr. Juez compareció Don Andrés Antonio Merino, natural y vecino de Granada, Profesor de Mineralogía (...) dijo: *De la excavación del mosaico de esta ciudad se dio principio a ella (...) que con las facultades con que se principiaron la excavación que fue con la de Pedro Galván, dueño que dijo ser del mosaico y de José Lisardo, manifestando el primero que habiendo descubierto aquel o aquella antigüedad al tiempo de pasar un Teniente Coronel que no se acuerda, fue a verlo y le dijo que pasase a su casa a alojamiento donde fue y le entregó tres mil reales que no quiso recibir quedándolos en depósito en la administración de Correos para que cubriesen y eviten las aguas para que no se arruinase, que él que es el Galván ha venido pagando las contribuciones por la casa y mosaico que se halla en ella, y por eso concedió licencia para hacer la excavación. Que el declarante ni demás individuos no tienen título alguno para ejercer el arte de Minero, pues sólo es la licencia de denuncia de Minas se le concede por el Gobierno Político de cada provincia. Que el que dice no hizo convenio ninguno con los demás de la Compañía, sólo trataron entre ellos de que si encontraba algo se daría parte a la autoridad pagando la tercera parte de la Audiencia Nacional, y lo restante entre iguales partes entres los mismos se dividirían, y lo que gustasen darían al declarante. Que lo que prometían sacar de la excavación era, según lo que demuestran las señales que en el mismo se ven que indudablemente hay algún depósito de monedas barbas y demás signos de metales sin poder fijar de clase de metales (...).* La intervención del Fiscal no pasa desapercibida, ya que en su intervención formula un principio renovador en torno a los derechos de los propietarios particulares de bienes

---

<sup>2403</sup> LARRA, M.J. “Las antigüedades de Mérida. Primer artículo”. *Revista Mensajero*, 22 de mayo de 1835; “Las antigüedades de Mérida. Segundo Artículo”. *Revista Mensajero*, 30 de mayo de 1835. Artículos selectos, Madrid, 1995.

arqueológicos: otro delito, o al menos exceso que exige reparación, como es la destrucción de parte de aquel precioso Monumento y el principal en aquel, lo es Pedro Galván, dueño de la casa donde fue descubierto, y a cuyo cargo y cuidado en su conservación se halla, y quien encargado como está por la autoridad municipal, como por notoriedad consta para que no solo no haga, ni aún permita ni consintiera el más leve deterioro, no dejó contribuir aquella excavación, ni permitir que ésta diera principio sin consentimiento de la autoridad. No basta como él dice que parte de aquél se halla en terreno de su propiedad. El Monumento artístico jamás pertenece ni puede pertenecer a ningún particular: Corresponde a la Nación. Así le ha hecho entender, y lo sabe y no ha debido tocar a él, porque ni es, ni puede ser suyo. No es fácil poner precio a este prejuicio, pero por si otro día le buscan y encuentran manos hábiles que repongan en la manera posible aquellas pérdidas, justo será que el causante Pedro Galván con sus bienes y en la parte que parezca arreglada conforme a la falta y exceso por él cometido, contribuya a su reparación<sup>2404</sup>.

---

<sup>2404</sup> CERRILLO MARTÍN DE CACERES, Enrique “Patrimonio Arqueológico y Legislación. Un mosaico destruido, un pícaro y una sentencia en 1846”. Mérida. Ciudad y Patrimonio. *Revista de Arqueología, Arte y Urbanismo*, Núm.5, 2001, pp.219.228.

---

**CAPÍTULO V. LA INCLUSIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN PÚBLICA  
COMO LIMITADOR DEL DERECHO ABSOLUTO DE LA PROPIEDAD  
PRIVADA Y SU PROYECCIÓN EN LA TUTELA DEL PATRIMONIO  
MONUMENTAL EN LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DEL  
ESTADO LIBERAL.**

---

Los seis años que transcurren entre la caída del régimen isabelino y el advenimiento de la Restauración, conocido como sexenio revolucionario, van a significar un periodo de inquietudes políticas y económicas<sup>2405</sup>, con la desaparición de O'Donnell y Narváez de la vida pública, tras su fallecimiento, la promulgación de una nueva Constitución, promulgada el 6 de junio de 1869<sup>2406</sup>, con la consiguiente proclamación de la regencia del general Serrano, con Prim como jefe del primer gobierno constitucional, la llegada al trono de Amadeo I de Saboya (30 de septiembre de 1870) y su pronta abdicación, el 11 de febrero de 1873; la proclamación de la I República el 11 de septiembre de 1873<sup>2407</sup>, y su derrumbe con el golpe de Estado del General Pavía el 3 de enero de 1874. En este periodo denominado tradicionalmente por la historiografía como el Sexenio Democrático, pudo haber sido una de las páginas más trascendentales de la historia de España, tanto por la significación social y política que hubiera supuesto la ruptura definitiva con el orden liberal y a su vez con los vestigios residuales propio del Antiguo Régimen, que habían quedado impregnado durante el periodo isabelino. En el seno de todo el proceso se fueron cuajando posiciones ideológicas extremas en el propio liberalismo (el paso del liberalismo doctrinario al liberalismo radical) o incluso en las nuevas fuerzas políticas que van cuajando en este momento (socialismo, federalismo, sindicalismo o incluso anarquismo)<sup>2408</sup>. El protagonismo exclusivamente burgués del proceso revolucionario comienza a ser cuestionado por la historiografía, especialmente con la tesis de Jover, quien *sostiene que el burgués dirigirá en amplia medida, la aventura cantonal como conductor de una revolución (...) llamada a trascender a medios extraburgueses: a medios artesanos y obrero, asistiendo al nacimiento en España de una auténtica conciencia proletaria (...) y es que entre 1868 y 1875 se ha producido el desplazamiento del concepto artesano al*

---

<sup>2405</sup> Sobre el periodo del Sexenio Revolucionario, BAHAMONDE, Angel y TORO, Julián *El sexenio democrático 1868-1874* en Historia de España, Madrid, Historia 16, 1986, pp. 867-868; FONTANA Y LAZARO, Josep *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*, Barcelona, 1973; MARTINEZ CUADRADO, M. El horizonte político de la Revolución Española de 1868, *Revista de Occidente*, núm. Extraordinario dedicado a la Revolución de 1868, 67, octubre de 1968.

<sup>2406</sup> Sobre la Constitución de 1869, SANCHEZ AGESTA, Luis *Historia del constitucionalismo español (1808-1936)*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.

<sup>2407</sup> LACOMBA, J.A. *La I República. El trasfondo de una revolución fallida*. Guadiana, 1973.

<sup>2408</sup> Aunque no es lugar en este trabajo de analizar social y políticamente este periodo creo que es necesario subrayar algunos matices



*concepto proletario en la tipificación de las clases trabajadoras (...)*<sup>2409</sup>. Se hablará incluso de dos revoluciones, la del 68 y la del 73, la que Jover *denomina como segunda revolución dentro del sexenio*<sup>2410</sup>, y que subrayará Miguel Beltrán que *puede hablarse de una revolución social dentro de una revolución burguesa*<sup>2411</sup>. En los últimos años han sido publicados una serie de investigaciones sobre lo que supuso el fenómeno revolucionario en el ámbito local, destacando el trabajo de Eloy Arias Castañón sobre la Revolución de 1868 en Sevilla.

No cabe duda que sería en el régimen tutelar de los bienes históricos y artísticos durante este periodo donde encontramos un mayor cambio en este periodo, especialmente en la transformación jurídica que se va a producir en el ámbito de la llamada propiedad estamental. Y es que la verdadera ruptura jurídica que va a definir el régimen revolucionario va a estar marcado por una configuración pública tanto del patrimonio eclesiástico, que ya había comenzado en épocas anteriores, y especialmente en el patrimonio monárquico convirtiéndolo en bienes nacionales, proceso iniciado en la revolución francesa y que hasta este periodo no se va quedar configurado. Sin embargo, el espíritu burgués de la revolución encierra una defensa intrínseca de la propiedad privada, como eje ordenador del liberalismo progresista que intenta ponerse en marcha en estos años, y que no va a quedar limitado por la intervención del Estado, siempre con la excepción de instar a la utilidad pública o intereses generales. Al mismo tiempo se va a producir un paralelismo en el régimen tutelar de la propiedad monumental, al convertirse tanto los bienes eclesiásticos como monárquicos en bienes públicos, pertenecientes al Estado, que concibe jurídicamente al pueblo que representa, punto final de un proceso que se iniciaba en el ámbito hispano desde la invasión francesa. En el ámbito del

Sexenio Revolucionario (1868-1874).	Régimen tutelar de la propiedad en el ordenamiento jurídico	Régimen tutelar de la propiedad monumental.
Propiedad estamental	Transformación jurídica de la propiedad estamental en bienes nacionales. Incautación de los bienes eclesiásticos y monárquicos	Transformación jurídica de la propiedad estamental monumental en bienes nacionales.
Propiedad privada	El derecho de la propiedad privada como eje ordenador del periodo revolucionario liberal	Límites de la intervención del Estado en el dominio privado del coleccionismo de los bienes históricos y artísticos.

<sup>2409</sup> JOVER ZAMORA, José María *Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España Contemporánea*, Ateneo, Madrid, 1956, p.25.

<sup>2410</sup> JOVER ZAMORA, José Prólogo a *La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874)*, Tomo XXXIV de la Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe. Madrid, 1981, p.XVIII.

<sup>2411</sup> BELTRAN VILLALVA, *Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX: Sociología de una dominación de clase*, Biblioteca de Ciencias Sociales y Sociología, Granada, 2010, p.189.

derecho de la propiedad privada del Patrimonio Histórico-Artístico paradójicamente no vamos a encontrarnos con grandes novedades con respecto a las etapas anteriores, por lo que aquellos bienes insertados en el dominio privado quedarán prácticamente ajenos a la intervención tutelar del Estado.

## **1. Un nuevo modelo de Estado Tutelar: El arte al servicio de los ciudadanos.**

### **1.1. El arte al servicio del pueblo: una nueva concienciación pública del Patrimonio Monumental.**

A partir del periodo revolucionario la sociedad española no seguiría siendo la misma, y por ello se irá impregnando una revisión incluso en una nueva concepción de la cultura y al mismo tiempo del legado patrimonial. No cabe duda que al igual que ocurrió en los periodos liberales precedentes, se intentaría delimitar una cultura oficialista, definida por el Estado, fundamentada por los principios de los gustos estéticos burgueses, pero al mismo tiempo se puede vislumbrar nuevos matices que rompería definitivamente con las reminiscencias de un pasado que se iba poco a poco diluyendo en una sola lectura de un trasnochado nacionalismo españolista y de confesionalidad católica. Javier Hernando va a resumir la nueva concepción que se le va a dar en estos años al Patrimonio Histórico-Artístico: *El tema del legado histórico conecta asimismo con el concepto de progreso que está igualmente muy presente en el armazón ideológico de los revolucionarios. El legado histórico forma parte del progreso porque éste no es posible partiendo de cero, sino como superación de periodos anteriores que tienen muchos valores, merecedores de ser contemplados, admirados y en ocasiones imitados. Sin embargo, la contemplación de la nueva clase triunfante hace de su pasado es muy relajada, en el sentido de que no siente continuadora ni de las costumbres, ni mucho menos de las ideas de sus predecesores. La nueva clase dominante estrena modos y maneras, no se siente vinculada en absoluto a su pasado histórico, periodo dominado por el grupo social a quien ha tenido que derribar para erigirse en clase hegemónica. De ahí que, por una parte, se permitan atacar de la manera más dura las actitudes de sus antecesores, al mismo tiempo que se sienten en condiciones de tomar del baúl de la Historia lo que les plazca, reutilizándolo de las formas más heterodoxas. El pasado no les ata ni les influye. ¿Qué le interesa entonces del legado histórico? Queda la idea de la patria, idea por cierto muy burguesa (...) Pues bien, la reivindicación histórica de la patria y los patriotas, convierte en objetos fundamentales todos aquellos que tienen significación en este sentido: una pintura, un documento, un objeto arqueológico, etc.*<sup>2412</sup>.

El arte como instrumento divulgador de las ideas de progreso que quería mostrar el nuevo Estado surgido del proceso revolucionario quedaría reflejado en la amplia producción normativa que se fue dando con el fin de proteger la creatividad artística, como aparece reflejado en la Exposición de

---

<sup>2412</sup> HERNANDO, Javier *Las Bellas Artes y la Revolución de 1868*, Oviedo, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1987, pp.52-53.

Motivos del **Decreto de 8 de agosto de 1873** por el que disponía la creación un instituto que se denominará Escuela Española de Bellas Artes en Roma: *No brilla un pueblo solamente por sus instituciones y por sus libertades políticas. Brilla también por todas las manifestaciones de su genio. Entre estas manifestaciones, ninguna tan íntima y tan característica como la manifestación de las artes. Tiene la ciencia por sus principios universales, independientes de tiempo y lugar, cierto carácter de impersonalidad, cierto carácter superior si se quiere, pero también ajeno al genio nacional. Pero las artes, hijas predilectas del sentimiento, se tiñen, no solamente con el genio individual del artista, sino también con el genio general de la nación que las produce. Y no hay nación ninguna que pueda negarnos el rango altísimo que en la historia del arte nos pertenece. Nuestra pintura, nuestra arquitectura, nuestra escultura misma resplandecen con cualidades propias de este suelo y exclusivas de su gloriosa historia. Ningún otro pueblo europeo ofrece esos monumentos, ya de origen árabe, ya de origen mudéjar, gloria nuestra y de los extraños envidia. La prueba de la vitalidad de nuestro genio está en que allá, cuando la pintura decaía en su cuna en la nación, madre del genio moderno, contábamos nosotros en pintura nuestro siglo de oro, los cuadros históricos de Velázquez, los cuadros místicos de Murillo, los cuadros marcados con el sello del genio, los cuadros de Ribera. Nuestra misma escultura, aunque toda ella religiosa, tiene un realismo tan profundamente autóctono, que no puede confundirse con ninguna otra escuela de la tierra. Es el pueblo español en sus artes, como en su literatura, un pueblo profundamente inspirado, y al mismo tiempo nativamente original.* **En el Real decreto de 5 de noviembre de 1872**, por el que convocaba la Exposición general española de Industria y Bellas Artes que tendría que celebrarse en Madrid el 1º de mayo de 1875, se vuelve a ratificar la nueva concepción del arte como instrumento de divulgación de la nueva sociedad que se quería construir: *las Bellas Artes, cuyo renacimiento es tan lozano y progresivo entre nosotros, contribuirá asimismo en gran manera, a proveer de encantos el concurso; los tesoros artísticos e industriales que para gloria de la antigua España se conservan en distintos puntos del Reino, tanto en poder de la Administración como de las Corporaciones y hasta de los particulares, cuya cesión temporal ha de pedirse, vendrán a ser exhibidos propiamente en tan solemne y quizás única ocasión*<sup>2413</sup>. **La Orden circular de 24 de noviembre de 1872** disponiendo a fin de que en la próxima Exposición Universal de Viena figure en la Sección Española todo cuanto sea capaz de dar una idea exacta del grado de prosperidad que alcanzan en nuestro país los importantes ramos de instrucción pública: Para conseguir tan laudable propósito es indispensable que los Presidentes de las Reales Academias y Academias de Bellas Artes, Rectores de los distritos universitarios y Gobernadores Civiles presten su eficaz cooperación y ayuda, ora excitando los primeros el celo de las corporaciones que tan dignamente presiden, ya estimulando los segundos a los Jefes de los establecimientos de enseñanzas, Juntas de educación primaria y Comisiones de Monumentos Históricos y artísticos de sus respectivos distritos y provincias para que contribuyan con su actividad y celo á la pronta realización de los patrióticos

<sup>2413</sup> Colección Legislativa, 2º semestre de 1872, p.670.

deseos que animan a esta Dirección General. En el artículo 2º se dispondría que los Presidentes de las Reales Academias científicas, literarias y artísticas y de las Academias de Bellas Artes excitarán a estas corporaciones para que designen y propongan respectivamente los documentos y objetos de su propio instituto que sean dignos de figurar en el certamen de que se trata; asimismo en el artículo 3º se establecía que igual excitación dirigirán los Gobernadores á las Comisiones de Monumentos históricos y artísticos y Escuelas de Bellas Artes de sus respectivas provincias<sup>2414</sup>. **El Decreto de 26 de diciembre de 1871** crearía una Comisión para promover los objetos que debían figurar en la serie de Exposiciones anuales de obras escogidas de Bellas Artes que había de celebrarse en Londres. En la Exposición de Motivos, el Gobierno apostaría por su presencia en la Exposición Internacional a pesar de las dificultades económicas en que se encontraba el país: *Convocada por el Gobierno inglés, y bajo la dirección de los Comisarios de S.M. Británica de la Exposición de 1851, una serie de Exposiciones Internacionales de objetos y productos escogidos de Artes, Industria e Invenciones científicas que, a partir del año próximo del 1871, debe verificarse en Londres, el Ministro que suscribe, no obstante las especiales circunstancias por qué nuestro país atraviesa y las dificultades consiguientes que ofrece el que España pueda estar dignamente representada en ellas, no ha titubeado en proponer a V.A. la adopción de todas aquellas disposiciones que contribuyan y respondan a tan patriótico fin, proponiendo de esta manera a nuestros artistas un poderoso estímulo al renacimiento de sus talentos y exhibición de sus productos para hacer patente de este modo<sup>2415</sup> nuestro actual estado de cultura artística (...) No aparecerá España sorda al llamamiento que el Gobierno inglés hace, y no es dudoso que, aún en medio de nuestra agitada situación política, las gloriosas tradiciones artísticas de nuestro país en la Edad Media y épocas posteriores han de ofrecer un consolador renacimiento que permita se no juzgue y aprecie más justa y acertadamente que de ordinario suele hacerse. Con este motivo se crearía una Comisión presidida por el Ministro de Fomento (art.1) al mismo tiempo que un Comisario que se entendería directamente con la Comisión general inglesa (art.2). Unos días después sería promulgada **la Orden del 30 de diciembre de 1870** por el que se dictaba varias disposiciones referentes a las Exposiciones de Bellas Artes en Londres<sup>2416</sup>.*

Una nueva funcionalidad del Patrimonio Histórico-Artístico se va a ir proyectando en el nuevo Estado Revolucionario. La cultura, y con ello el legado patrimonial se convertirá en el verdadero instrumento pedagógico de la sociedad moderna que se quiere delimitar en estos años. Un gran número de disposiciones legislativas en tan poco espacio de tiempo irá abriendo el camino a una verdadera concienciación pública del Patrimonio Artístico-Artístico, por el que pueda participar todos los miembros que pertenezcan a la comunidad

---

<sup>2414</sup> Colección Legislativa, 2º semestre, 1872, p.758.

<sup>2415</sup> Colección Legislativa, 2º semestre de 1870 (segunda parte), pp.1002-1004; Gaceta de Madrid, 2 de enero de 1871.

<sup>2416</sup> Colección Legislativa, 2º semestre de 1870 (segunda parte) pp.1022-1032).

política, que irían a conectar con la política educativa, e incluso con los postulados de los principios del sufragio universal, que le dará la identidad de una sociedad democrática. Una población que participe en las cuestiones políticas tiene que estar bien formada, siendo el legado patrimonial un referente primordial en la política de formación de la ciudadanía, concepción que en realidad estaría conectado con el espíritu que había significado la ilustración y el proceso revolucionario francés. La nueva concepción pública del Patrimonio Histórico-Artístico irá unida a un nuevo programa político de protección estatal, aunque asistiremos un vaivén en la actitud del Estado, que van desde la amplia destrucción patrimonial, la mayor parte religiosos, hasta las disposiciones normativas en base a la salvaguardia de algunos monumentos históricos que se darían en el Gobierno de la I República. Algunos autores de renombre, como fue el caso del crítico Cruzado Villaamail redactaron algunos artículos en la que ponía en entredicho la política tutelar que había llevado a cabo por parte del Gobierno y la necesidad de una reforma que modernizara el sistema público de Bellas Artes. En esta línea cabe destacar su artículo publicado en 1868 en la revista *El arte en España*, que él mismo dirige, con el título de *Lo que ha hecho y lo que falta que hacer a la revolución, en el personal, y en la administración, y en la enseñanza de las Bellas Artes*, donde plantea la reforma de materia de bellas artes como consecuencia de la propia revolución: *Preciso es que las saludables y vivificadoras reformas de la revolución lleguen a todas las esferas de la administración pública... No es posible que las artes... puedan permanecer extrañas a estas grandes revoluciones. Tras resaltar las conquistas llevada a cabo en el seno de los derechos individuales, apela al papel de la Administración en aras a la tutela pública de las Bellas Artes: Pero en materia de Bellas Artes no depende todo del individuo, y es preciso que el espíritu de reforma penetre por todas partes, llegue a todas las esferas de la Administración... Para conseguir pues que en la esfera de las bellas artes y sus manifestaciones penetre el nuevo espíritu que simboliza la revolución, forzoso es que el Ministerio de Fomento sea revolucionario, y en breve tiempo y sin doblarse, sin cansarse realice las reformas (...)*<sup>2417</sup>.

## **1.2. Un ensayo renovador del modelo administrativo tutelar del Patrimonio Monumental durante el Sexenio Revolucionario.**

Las reformas en el ámbito del sistema educativo impulsada por el entonces Ministro de Fomento, Ruíz Zorrilla, especialmente con la promulgación del Decreto-Ley de 25 de octubre de 1868, abre el camino renovador de tutela pública de la cultura. Con el Decreto de 21 de noviembre de 1868, siendo Ministro de Fomento Ruiz Zorrilla, serían reformados los estudios de Diplomática, y reguló el cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. El nuevo espíritu reformador que había impregnado el nuevo gobierno quedaría reflejado en la propia Exposición de Motivos al considerar la importancia que

<sup>2417</sup> CRUZADO VILLAAMAIL “Lo que ha hecho y lo que falta que hacer a la revolución, en el personal, y en la administración, y en la enseñanza de las Bellas Artes”, *El Arte en España*, 1868, pp.244-245.



significaba la reforma de la escuela de Diplomática: *Los estudios de Diplomática ha merecido siempre una atención especial por parte de los Gobiernos liberales, protectores incansables de la ilustración pública, a quienes una crítica imparcial y justa atribuye los gérmenes y en muchos casos el desarrollo de las más profundas reformas (...) No mucho después fue creada la Escuela de Diplomática, que sufrió al poco tiempo una reforma con la publicación de la ley general de instrucción pública de 1857. La creación de esta Escuela fue indudablemente un gran paso; pero su organización adolecía de grandes defectos, y no está hoy de modo alguno en armonía con el espíritu que domina en las reformas hechas en la pública enseñanza (...) El Ministro que suscribe, guiados por estas ideas fundamentales, cree necesario reformar la Escuela Diplomática, limitando sus asignaturas a aquellas que constituyen la especialidad de los conocimientos propios de los Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios. El **Reglamento de 5 de julio de 1871** introduciría en la organización del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios profundas modificaciones, creando en el seno de los establecimientos las Juntas de Gobierno. Uno de las medidas más trascendentales de Ruíz Zorilla sería la disolución de la Real Academia de Arqueología y Geografía del Príncipe Alfonso, con la **Orden de 31 de octubre de 1868**, en cuya Exposición de Motivos criticaría duramente el papel que había representado en el periodo isabelino: *Decidido el Ministerio que suscribe a anular todos los privilegios creados a la sombra de un régimen opuesto a los grandes y fecundos principios que sirven de base a nuestra revolución, no puede tolerar la existencia de algunas Corporaciones que viven consumiendo los recursos del Tesoro, oponiendo un obstáculo al desarrollo de las ciencias, y produciendo como único fruto de sus privilegios la concesión de vanos y pomposos títulos con que pretenden distinguirse sus individuos y adquirir renombre oficial. Los principios de libertad, consignados por un hecho por el Gobierno Provisional, no se oponen en modo alguno a la formación de todo género de asociaciones, cualquiera que sea su objeto, siempre que éste dentro de las leyes; pero tampoco permiten privilegios que vengan a aumentar el presupuesto de gastos, sin ventaja alguna para el público y en beneficio de corporaciones, cuyo origen, historia y tendencias repugnan a la actual situación del país.* Los bienes que habían ido adquiriendo la Academia, y que no fueran de propiedad particular, pasarán al Museo Arqueológico Nacional (art.2)<sup>2418</sup>.*

El organigrama administrativo de la tutela del Patrimonio Monumental sería puesto en entredicho por el nuevo gobierno revolucionario. Un interesante testimonio de ello lo podemos encontrar en el ya citado artículo de Cruzado Villamil publicado en *El Arte de España* en 1868, que criticaría la potestad que hasta este momento había tenido la Real Academia de San Fernando en el ámbito de las Bellas Artes, por lo que reivindicaba una tutela más directa y menos corporativista por parte del Ministerio de Fomento: *Nada más abierta contradicción con los principios liberales que animan al Señor Ministro de Fomento, ni más en lucha con el nuevo orden de cosas establecido, desde el punto de vista de nuestra revista, que la Academia de San Fernando considerada como un cuerpo*

---

<sup>2418</sup> LUZON NOGUÉ, José María, 1993, pp.271-272.

*consultivo y deliberativo a la vez. No es nuevo que el Arte en España pida la reforma de la Academia de Nobles Artes: mil veces lo ha hecho y no ha sido oída nuestra voz todavía, porque causas exclusivamente del orden político imposibilitaban realizar lo que, sin embargo, estaba en conciencia que era una necesidad apremiante (...) Como en nuestro desgraciado país suele acontecer que se da más importancia a la cuestión de personas que a las cosas, y como pocas veces habrá sucedido que una cuestión de personas que a las cosas, y como pocas veces habrá sucedido que una cuestión de personas no responda o tenga por móvil o apoyo, si no la política, la voluntad al menos de algún hombre político, importa mucho a nuestro pobre juicio que el Gobierno, o concretando más, que el Ministerio de Fomento, no permite que esté siempre en las mismas manos y sobre todo en manos que él no ha consagrado, el ejercicio consultivo, y deliberativo en casos, de los asuntos más importantes de las Bellas Artes. Ciertamente no ha de producir conflicto de mucha gravedad para este ni para ningún gobierno la organización actual de la Academia, pero no es menos verdad que un Gobierno (...) que se ha levantado contra el monopolio, sea cual fuera la forma en que se ejerza; que un Gobierno que rige hoy los destinos del país en nombre de la libertad y que la lleva a todas las esferas de la Administración, no debe, no puede consentir que continúen todavía funcionando ciertas ruedas de premiosos engranajes que entorpecen la marcha libre de la administración. Y si la Academia viene o no desde siempre ejerciendo un monopolio, fácil es demostrarlo. Ella es el cuerpo consultivo que la Dirección de Instrucción tiene, ella la única voz oficial en materia de bellas artes. Y, ¿son acaso únicamente los académicos de San Fernando los solos españoles que de bellas artes se ocupan? Ciertamente que no (...) Quede la Academia, como cuerpo estudioso así de la teoría como de la historia del arte, aliente y estimule estos estudios (...) Y el Ministerio de Fomento instituya una corporación, junta, consejo, sección o como le plazca llamarle, de personas conocidas en el terreno práctico y teórico de las bellas artes, que formando un cuerpo consultivo, le sirva para darle en todas las cuestiones el más sano consejo. Sea pues creada esta junta sin dispendios grandes por el Tesoro y a semejanza del Consejo de instrucción pública (...) De esta manera el Estado tendría directa y exclusiva intervención en el nombramiento de estos consejeros o consultores, y podría, suspenderlos y renovarlos en sus cargos, según conviniera a sus intereses administrativos y políticos (...) y acabaría al fin de ser patrimonio de unos pocos, como lo está siendo toda la vida, y con grave daño del Estado y de los particulares que se dedican a las artes o aman y estudian sus monumentos<sup>2419</sup>.*

Durante la I República podemos resaltar el hecho de un nuevo intento de reformar la administración del Patrimonio Monumental, especialmente con las Reales Academias, por lo que se promulgaría el **Decreto de 8 de mayo de 1873**, disponiendo que la Academia de Nobles Artes de San Fernando cambie esta denominación por la de Academia de Bellas Artes, incluyendo a su vez la riqueza musical como parte del Patrimonio de una Nación, medida que abriría el camino a una concepción patrimonial. Con la llegada de la I República se redactan unos nuevos estatutos que son prácticamente iguales que los isabelinos de 1864, por lo que el **12 de diciembre de 1873** (Gaceta de Madrid,

<sup>2419</sup> CRUZADA VILLAMIL, G. 1868, pp.275-278.

28 de mayo de 1874). En su capítulo I dedicado a los objetos de la Academia, se especificaba el promover el estudio de la Pintura, Escultura, Arquitectura y Música, estimulando su ejercicio y difundiendo el buen gusto artístico con el ejemplo y la doctrina (art.1), por lo que se identificaba con la nueva concepción pública de las artes en general, para lo que se especificaban algunas facultades potestativas como la de recoger y conservar ordenadamente los libros, dibujos, estampas, cuadros, esculturas, diseños de obras arquitectónicas, obras y manuscritos musicales y demás objetos de arte (art.2º), y sobre todo la inspección de los museos públicos, velando por la conservación y restauración de los monumentos artísticos, y proponiendo al Gobierno cuanto juzgue conveniente al progreso de las Bellas Artes (art.3º), y coordinándose con los otros organismos administrativos del Patrimonio Monumental por lo que se proyectaría elaborar un reglamento especial que estableciera las relaciones de la Corporación con las Comisiones provinciales de Monumentos históricos y artísticos, al mismo tiempo que determinara *el modo como ha de ejercer la inspección de los Museos que la ley le encomienda* (art.4º). Un intento de dar impulso a las Bellas Artes en el ámbito exterior lo la creación de la Escuela de Bellas Artes de Roma a raíz de la promulgación del Decreto de 8 de agosto de 1873: *No brilla un pueblo solamente por sus instituciones y por sus libertades políticas. Brilla también por todas las manifestaciones de su genio. Entre estas manifestaciones, ninguna tan íntima y tan característica como la manifestación de las artes. Tiene la ciencia por sus principios universales, independientes de tiempo y lugar, cierto carácter de impersonalidad, cierto carácter superior si se quiere, pero también ajeno al genio nacional. Pero las artes, hijas predilectas del sentimiento, se tiñen, no solamente con el genio individual del artista, sino también con el genio general de la nación que las produce. Y no hay nación ninguna que pueda negarnos el rango altísimo que en la historia del arte nos pertenece. Nuestra pintura, nuestra arquitectura, nuestra escultura misma resplandecen con cualidades propias de este suelo y exclusivas de su gloriosa historia. Ningún otro pueblo europeo ofrece esos monumentos, ya de origen árabe, ya de origen mudéjar, gloria nuestra y de los extraños envidia.* Las Comisiones de Monumentos adoptarían un papel secundario en la tutela del Patrimonio Monumental, por lo que incluso se conocen varios llamamientos de la Real Academia de la Historia para que fueran consultados por las autoridades pertinentes especialmente en las transformaciones urbanísticas que se estaban produciendo en este periodo<sup>2420</sup>.

## **1.2. Una nueva concepción del Patrimonio Eclesiástico Monumental en el Sexenio Revolucionario: El ensayo frustrado del Patrimonio Monumental Eclesiástico como Bien de Dominio Público.**

---

<sup>2420</sup> MAIER, Jorge *Comisión de Antigüedades. Comunidad de Madrid. Catálogo e índices.* Real Academia de la Historia, Madrid, 1998, p.32.

El ensayo frustrado del Patrimonio Monumental Eclesiástico como Bien de Dominio Público.	Perfiles políticos-institucionales en asuntos eclesiásticos	Política institucional de la protección del Patrimonio Monumental Eclesiástico
Gobierno Provisional del General Serrano (1868-1871).	Incautación de los bienes de propiedad eclesiástica	Destrucción del patrimonio eclesiástico de interés histórico y artístico en base a los principios de urbanismo. El Decreto del 21 de octubre de 1868. El proceso de secularización de la riqueza artística: La incautación de los bienes religiosos de interés histórico y artístico por el Decreto del 1 de enero de 1869.
Gobierno de Amadeo de Saboya (enero 1871-febrero 1873)	Política de frustración de restablecimiento de la relación Iglesia-Estado.	La suspensión de las ventas de bienes inmuebles eclesiásticos de interés histórico y artístico.
I República (febrero 1873-enero 1874).		La restauración de los edificios religiosos en manos del Estado: La ley de 9 de mayo de 1873. La tutela del Gobierno Republicano sobre las Corporaciones Municipales en el ámbito de la conservación del Patrimonio Monumental Eclesiástico: El Decreto del 16 de diciembre de 1873.

### 1.2.1. El debate jurídico de la propiedad eclesiástica del Sexenio Democrático (1868-1874).

#### 1.2.1.1. Un nuevo capítulo de incautación de los bienes eclesiásticos durante la Revolución de 1868.

Con la Revolución de 1868 se volvería a abrir nuevamente el debate en torno a la propiedad de los bienes eclesiásticos, que presumiblemente se había cerrado con la aplicación del Convenio de 1855. La identificación de la Iglesia con el trono de Isabel II supuso que hubiera una reacción violenta por parte de las Juntas Revolucionarias. Las Juntas van a promulgar un amplio número de decretos de claro matiz anticlerical, que como afirma Rafael M<sup>a</sup> Sanz de Diego se trata de una legislación efímera, aunque marcaría no cabe duda el camino a

seguir por los primeros Gobiernos Revolucionarios<sup>2421</sup>. El Gobierno Provisional presidido por Serrano el 8 de octubre de 1868 va a promulgar once decretos claramente anticlericales, que estarían en la línea de los defendidos por los elementos más radicales del liberalismo desde 1824. Un primer grupo de disposiciones normativas suprimirían a algunas instituciones religiosas, comenzando por la la Compañía de Jesús, a raíz del decreto **de 12 de octubre de 1868**, completándose con la **Orden de 16 de noviembre** que establecería la ocupación de los bienes raíces y muebles de la Compañía de Jesús y demás corporaciones suprimidas, la del 19 de noviembre que suprimiría a las Conferencias de San Vicente de Paúl, la del 21 del mismo mes la supresión de las Facultades de Teología en la Universidad, la del 22, que se suprimiría a su vez la subvención a los seminarios y la del 2 de diciembre, suprimiendo las Ordenes Militares. Otro grupo de disposiciones se centraría en la incautación de los bienes materiales de las comunidades religiosas, y los límites de libre adquisición por lo que se volvía a replantear las medidas adoptadas en el primer liberalismo. De esta manera el **Decreto de 15 de octubre de 1868** derogaría al de del 25 de julio del mismo año, que autorizaba a las comunidades religiosas a adquirir y poseer bienes según las leyes canónicas y los convenios celebrados con la Santa Sede, concediendo solamente esta facultad a las personas físicas integrantes de cada comunidad. Tres días después, se promulgaría el **Decreto de 18 de octubre de 1868** se declaraban extinguida desde esta fecha todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones, y demás casas de religiosos de ambos sexos, fundados en la Península e islas adyacentes desde 29 de julio de 1837, pasando a propiedad del Estado todos los edificios, bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las casas de comunidad de ambos sexos suprimidas (art.2), reduciéndose a la mitad todos los Todos los conventos, monasterios, colegios, congregaciones y demás casas religiosas que quedaron subsistentes por la ley de 29 de julio de 1837, siendo los Gobernadores Civiles, oyendo a los Diocesanos, quien designarán, en el término de un mes, contando desde la publicación de este Decreto, los que hayan de conservarse, prefiriendo aquellos que tengan algún mérito artístico (art.5)<sup>2422</sup>.

A pesar del proceso de incautación de los bienes religiosos, se vislumbraban ya desde las propias filas revolucionarias opiniones encontradas al respecto, desde las peticiones de los republicanos que apoyaban una separación definitiva entre Iglesia y Estado, a la de otras facciones que seguían persistiendo en un acercamiento al clero, tendencias divergentes que se plasmarían con la aprobación de la Constitución de 1869, que al mismo tiempo que proclamaba la libertad de cultos y se suprimía la confesionalidad del

---

<sup>2421</sup> SANZ DE DIEGO, Rafael M<sup>o</sup> “La legislación eclesiástica del Sexenio Revolucionario (1868-1874)”, *Revista de Estudios Políticos*, Núm.200-201, 1975, pp.195-224.

<sup>2422</sup> ANDRÉS-GALLEGO, J. *La Legislación religiosa de la revolución española de 1868 (periodo constituyente)*, 1977, n<sup>o</sup> 33, pp.257-301



Estado (art.21), según preceptuaba el artículo 21, se establecía la obligación de la Nación española de mantener el culto y los ministros de la religión católica (art.20)<sup>2423</sup>. La misma divergencia se dieron en otras disposiciones normativas, por lo que frente a una línea de tradición liberal, donde podemos insertar el plan de reforma eclesiástica que presentaría en 1870 el Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Monteros Ríos, como el nombramiento de curas por las parroquias o la integración de los territorios de las antiguas órdenes militares en las diócesis, del que Callahan afirma *que satisfacía parcialmente el deseo de la Iglesia de estar libre de la interferencia del Gobierno y mantenía el compromiso del Estado de financiar a la Iglesia, aunque en menor medida que antes*<sup>2424</sup>, el Estado, en contrapartida, se comprometía a no intervenir en los asuntos internos de la Iglesia y a no expropiar sus bienes más que en caso de utilidad pública. Sin embargo, el proyecto no prosperaría por la oposición de los republicanos y elementos radicales y por la propia Iglesia que se negaba a aceptar cualquier reforma.

#### 1.2.1.2. El Gobierno de Amadeo de Saboya (enero 1871-febrero 1873).

La llegada de Amadeo I de Saboya intentaría abrir una nueva etapa en las relaciones de la Iglesia y el Estado, concretamente en el ámbito de la propiedad eclesiástica, aunque sin llegar a suponer una ruptura radical con la etapa anterior, ya que nuevamente se imponía el principio de superposición del poder civil sobre la administración eclesiástica en los asuntos financieros, como podemos comprobar en el preámbulo del **Proyecto de la Ley de 2 de octubre de 1871** sobre el presupuesto del clero, que desarrollaba el artículo 20 de la Constitución, que al mismo tiempo que se reconocía la personalidad jurídica de la Iglesia y su derecho a adquirir, conservar y transmitir la propiedad, debía estar regulada por una la ley civil. De la misma forma en los propios artículos 13 y 14 del mencionado proyecto se fijaría el tipo máximo del valor de propiedad que podían adquirir diócesis y parroquias, al mismo tiempo que se limitaba a las Órdenes y Congregaciones religiosas la facultad de adquirir edificios de cultos<sup>2425</sup>. El 29 de septiembre de 1872 se publica en la Gaceta de Madrid el proyecto de ley en que se fijaba el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre el clero y el Estado, suponiendo su Exposición de Motivos un verdadero tratado sobre la concepción de la propiedad eclesiástica. Comienza con un alegato a la función política y administrativa que la Iglesia había desempeñado en el sistema del Antiguo Régimen, siendo sustituido por la labor civil del Gobierno, por lo que se reducirían en el nuevo Estado Liberal sus necesidades materiales. Sin

<sup>2423</sup> PETCHEN, Santiago, *Iglesia-Estado. Un cambio político. Los Constituyentes de 1869*. Madrid, 1974, p.208. Los debates parlamentarios en torno a la propiedad eclesiástica y la intervención estatal sobre su organización se pueden consultar en CARCEL ORTIZ, Vicente *Iglesia y Revolución en España, 1864-1874*, Pamplona, 1979; p.197 y ss.

<sup>2424</sup> CALLAHAN, William J. *Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874*, Madrid, Cátedra, 1989, p.253.

<sup>2425</sup> MORENO ANTON, María G., 1987, pp.76-77.

embargo, el Estado seguiría manteniendo económicamente a la Iglesia, no por razones históricas, a modo de indemnización de los bienes perdidos en las medidas desamortizadoras, sino para cumplimentar las necesidades espirituales de los ciudadanos: *También el patrimonio de la Iglesia pasó en España por grandes vicisitudes, hasta que desapareció en el siglo actual para ser reemplazado por una subvención del Estado. A las leyes de expropiación de la Iglesia sucedieron otras determinando la dotación con que el Estado había de contribuir para sus atenciones espirituales (...) el mismo Concordato, el Convenio adicional de 1859, y últimamente la Constitución del Estado, que en su artículo 21 sanciona nuevamente el deber que tiene la Nación de mantener el culto y los ministros de la Iglesia. Pero a pesar de lo dispuesto en las mencionadas leyes, y señaladamente en el último Concordato y en su acta adicional, es necesario reconocer que hasta ahora la Iglesia no ha logrado entrar en España en una situación definitiva, en la que tenga asegurado los medios económicos que le son indispensables para el desempeño de su sagrado ministerio, con la independencia a que tiene un indiscutible derecho(...) La necesidad de indemnizar a la Iglesia de los bienes que en diferentes épocas le han sido expropiados por el Estado es el fundamento de la obligación por éste contraída de mantener el culto y los ministros de la Religión Católica (...) Los grandes principios proclamados por la Asamblea Constituyente francesa en 1789, destruyeron las bases constitutivas de los antiguos Estados (...) la Iglesia (...) tuvo que renunciar a los privilegios que había adquirido, perdiendo de este modo su carácter de institución política y administrativa. Y desapareciendo su personalidad bajo estos dos aspectos, no necesitaba ya la gran propiedad que hasta entonces había empleado en realizar fines que en adelante habían de entrar de lleno en la jurisdicción del Estado (...) y en este Estado las leyes de expropiación vinieron a privarlas de sus bienes territoriales (...) pasando aquellas a poder de la Nación. Pero al ser privada la Iglesia de los grandes recursos con una parte de los cuales habían de cubrir sus atenciones religiosas, tomó la Nación sobre sí, el deber de cubrirlas con sus propias rentas a título de una debida indemnización por los bienes que hasta entonces habían estado consagrado a aquel servicio ¿Pero esta indemnización debe entenderse al valor total de los bienes que de la Iglesia pasaron a propiedad del Estado, o debe tener más bien como límite las verdaderas necesidades del servicio religioso? La Iglesia no tiene hoy necesidades políticas ni administrativas, en el orden civil, a que atender. Si hubiese conservado su antiguo patrimonio, no necesitaría de sus productos más que la parte indispensable para cubrir sus atenciones religiosas. La Nación, pues, le debe una indemnización por el valor de los bienes necesarios para estas atenciones; pero no por el resto de su patrimonio, que consagraba a sus funciones políticas y a sus servicios administrativos. Estos son hoy directamente sostenidos por cuenta del Estado, de la provincia o del Municipio, y no sería justo que la Nación se gravase doblemente con unos mismos gastos. Hoy la Iglesia no tiene carácter político entre las instituciones del país. No necesita, por lo tanto, bienes para cubrir los gastos que en otros tiempos sus funciones políticas la proporcionaban. La enseñanza laical y la beneficencia pública han dejado también de ser servicios eclesiásticos, cubriéndose sus atenciones con fondos civiles(...) Queda por lo tanto, reducida la indemnización que el Estado le*

*debe a la que baste para la dotación del culto y para la cóngrua sustentación de sus ministros*<sup>2426</sup>.

En base a su limitada función social, concretamente en el ámbito espiritual, se consideraría que la Iglesia no necesitaría de un amplio patrimonio territorial para cubrir sus necesidades, por lo que se pide en el proyecto de ley una limitación de su derecho a adquirir propiedades, más aún cuando, por su carácter amortizador pudiera perjudicar a los intereses generales del Estado: *La corriente avasalladora de las ideas modernas, que reclaman la movilización de toda propiedad, chocó de frente con la amortización por la Iglesia (...) De manera que la propiedad territorial de ésta fue arrojada a la circulación, lo que fue también la propiedad vinculada de las clases nobles del Estado. O lo que es lo mismo, la tendencia a la individualización de la propiedad se impuso incondicional e ilimitadamente sobre todo lo que hasta entonces había venido subsistiendo como propiedad corporativa(...) Si llegase un día que al amparo de esta facultad la propiedad inmueble de la Iglesia, que por razón de sus condiciones no puede menos de ser amortizada, amenazase o fuese un obstáculo al desarrollo de la riqueza pública y hasta un peligro para la existencia del Estado, los conflictos de otros tiempos volverían a surgir (...) Un deber de franca lealtad y su ardiente deseo de buscar una garantía verdaderamente sólida y eficaz para la Iglesia en el ejercicio de un derecho tan importante, le inspira el valor necesario para proponer a las Cortes que limiten la mencionada facultad (...) Conviene a la Iglesia que a aun a costa de una parte de su derecho, se haga imposible en el porvenir la necesidad o siquiera la conveniencia por parte de la sociedad civil de atacar la propiedad eclesiástica. Solamente de este modo podrá restablecer su patrimonio sin recelos ni temores procedentes de las terribles crisis por qué ha pasado en otras épocas de su historia. Conviene, en fin, a la Iglesia armonizar desde luego sus intereses económicos con los generales del país, porque solamente así conseguirá la seguridad que necesita para ejercer los derechos que la ley civil le reconoce. Acepte, pues, de buen grado, ya que en su beneficio se establece, una limitación a su facultad de adquirir (...)*<sup>2427</sup>. En el artículo 13 se disponía la libertad de adquirir y conservar la propiedad de toda clase de bienes por parte de las Sillas Episcopales, iglesias y Cabildos Catedralicios, Seminarios Conciliares y parroquias, que en cambio no sería autorizado en el caso de las congregaciones y órdenes religiosas, exceptuando los edificios necesarios para el culto y para la habitación, a no ser que tuviera una autorización especial del Gobierno (art.14)<sup>2428</sup>.

### 1.2.1.3. I República (febrero 1873-enero 1874).

Durante el periodo de la I República la actividad legislativa referente a los asuntos eclesiásticos fue menor, ya que el Gobierno le atraía la atención otras preocupaciones como eran el fenómeno cantonalista, las guerras carlistas y el progresivo desmoronamiento que estaba viviendo el país en este momento. Algunas medidas aisladas como la supresión de las Ordenes Militares por el

<sup>2426</sup> Colección legislativa, 1872, p.362 y ss.

<sup>2427</sup> Colección Legislativa, 1872, p.388-390.

<sup>2428</sup> Colección Legislativa, 1872, p.395.

Decreto de 9 de marzo de 1873, en la redacción de una nueva constitución que no llegó a promulgarse y sobre todo el Proyecto de Ley que presentado por Pedro Moreno Rodríguez, Ministro de Gracia y Justicia, sobre separación Iglesia-Estado, del 2 de agosto de 1873. En el artículo 6º ya subrayaría la intención de solventar la cuestión de la propiedad eclesiástica, por lo que dispondría que *todo lo relativo a los bienes y derechos que posee hoy la Iglesia, así como referente a las asignaciones que hasta la actualidad ha venido percibiendo del Estado por varios conceptos será objeto de una ley especial y definitiva, para cuya preparación procurará el Gobierno de la República proceder de acuerdo con las autoridades, corporaciones e individuos especialmente interesados*, respetando el dominio eclesiástico, *interin se forma la ley prescrita en el artículo anterior*, en todos los edificios que en ese momento estuviesen destinados al culto u otro fin religioso, salvo los derechos que sobre ellos competen a particulares o corporaciones (art.7.1). Los edificios que puedan calificarse como monumentos artísticos por las corporaciones científicas a quien corresponda se declaran desde luego bajo la protección e inspección inmediata del Estado (art.7.2).

#### **1.2.2. La política urbanística de las Juntas Revolucionarias y la destrucción del Patrimonio Eclesiástico Monumental.**

Las medidas de derribo de los edificios religiosos y civiles promovidos por las Juntas Revolucionarias, fundamentadas en unos peculiares intereses modernizadores de las urbes tradicionales, escondía en la mayoría de los casos una ideología profundamente anticlerical al mismo tiempo que unos intereses claramente económicos. Estas medidas dieron lugar a amplios debates urbanísticos en la que se estaba poniendo en entredicho el modelo de ciudad que la burguesía más revolucionaria quería poner en práctica, frente otros sectores que apostaban por un inmovilismo estructural de pretensiones ideológicas y de gustos estéticos sentimentales. La reacción del mismo Gobierno no se hizo esperar ya que se comenzaría a regular unas disposiciones que limitara la actitud, radical en muchas ocasiones, de las Corporaciones Municipales revolucionarias que estaba suponiendo la destrucción de un gran número de inmuebles de interés histórico y artístico. El papel de la Real Academia de San Fernando junto con las Comisiones Provinciales de Monumentos fue determinante a la hora de la salvaguardia de un gran número de edificios que hubieran desaparecido por la piqueta.

##### **1.2.2.1. El debate urbanístico en el ámbito del sexenio revolucionario: El desmantelamiento de la ciudad conventual a través de la política de derribos por parte de las Corporaciones Municipales.**

Nadie duda hoy la ola destructiva que supuso los acontecimientos revolucionarios de 1868, y las inquietantes medidas de los gobiernos provisionales en la política urbanística que incrementaron los derribos de significativos inmuebles de carácter histórico, en muchas ocasiones llevada

más por las ansias revolucionarias que por la modernización de la ciudad<sup>2429</sup>. Una de las medidas más conflictivas que tomaron la Junta Revolucionaria fue la incautación de los edificios religiosos con la finalidad de venderlos, darle un uso público o incluso demolerlo. En la propia ciudad de Madrid a comienzos de 1869 serían derribadas varios templos, como el de Santa Cruz, San Millán y Santa María y los conventos de San Martín, Santo Domingo y Maravillas. En Barcelona sería destruida por el ensanche de Cerdá uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica del siglo XIV que conservaba la urbe, la iglesia de Santa María de Junquera, junto a la iglesia de San Juan de Jerusalén<sup>2430</sup>. Las ciudades andaluzas también fueron muy perjudicadas como fueron los casos de Granada, Córdoba o Sevilla, por citar algunos ejemplos. Probablemente esta medida sea uno de los signos más llamativos del proceso de secularización que se quiso llevar a cabo durante el periodo revolucionario. Como apunta Gregorio de la Fuente Monge *las Juntas Revolucionarias incluyeron los derribos de edificios religiosos, algunos de ellos mal conservados y afectados por antiguos expedientes desamortizadores, dentro de una política de obras públicas que, justificada en razones de interés general, afectó también a construcciones civiles y militares, diluyendo así su carácter anticlerical. No hay un recuento completo de los edificios religiosos tirados abajo por la piqueta anticlerical (...)*<sup>2431</sup>. No cabe duda que se va a originar una amplia discusión en torno a la política llevada a cabo por las distintas juntas revolucionarias con respecto a la demolición de un amplio número de edificios religiosos y la apertura de espacios públicos, que ni más ni menos representarían la continuidad de las políticas urbanísticas llevadas a cabo desde los procesos liberales inicial de la España Contemporánea, que la historiografía tradicional siempre lo definió como un mero capítulo de la política anticlerical española, pero que en los últimos tiempos se ha intentado apreciar más que una simple actitud secularizadora en una verdadera modernización del tejido urbano donde los principios de higiene y seguridad de los particulares primaban sobre los meramente espirituales e incluso en menor medida, en aquellos edificios que sin ninguna duda encerraba en sí mismo unos valores históricos y artísticos dignos de conservar. En este sentido Gregorio de la Fuente Monge precisa como *Los junteros de 1868 podían haber justificado las demoliciones de edificios religiosos en sus ideas secularizadoras, pero prefirieron alegar sólo necesidades urbanísticas y motivos técnicos, higienistas y económicos para subrayar que los derribos constituían una fuente de riqueza para el municipio y los particulares, un alivio para la clase jornalera y un bien para el común de los vecinos. Por su parte, el clero y los feligreses criticaron los derribos destacando sobre todo el valor histórico-artístico de los edificios, y en menor medida, su carácter religioso, pero al*

<sup>2429</sup> GONZALEZ CASTAÑEDA, Teodosio “La revolución de 1868 en 110 municipios españoles (Proceso de formación de las Juntas Revolucionarias desde el 19 de septiembre hasta el 31 de octubre)”, *Revista de Historia Contemporánea*, 3, 1984, pp.55-85.

<sup>2430</sup> GRAHIT Y GRAU, Jorge *Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia de Barcelona: memoria de la labor realizada por la misma en su primer siglo de existencia (1844-1944)*. Barcelona, 1947.

<sup>2431</sup> DE LA FUENTE MONGE, Gregorio El enfrentamiento entre clérigos y revolucionarios en torno a 1869, en SERRANO, Rafael (ed.), *El Sexenio Democrático en Ayer*, 44, Madrid, 2001, p.130.



*presentarlos como monumentos y templos no llegaron a convertirlos en claro símbolos políticos, presentando a los revolucionarios como enemigos del arte y quizás del clero (...)*<sup>2432</sup>. En la misma línea encontramos la tesis de José Manuel Macarro: *He reiterado la palabra sorprender, porque nuestra mentalidad actual es proclive a conservar la herencia de nuestro pasado histórico porque hemos perdido demasiado de él. Por el contrario, los hombres de 1868 vivían una realidad distinta: era ese pasado el que los tenía atosigados, ideológica y arquitectónicamente. Ideológicamente, porque era el signo vivo de una concepción de Sevilla y de España contra la que se había realizado la revolución, arquitectónicamente, porque al ser la forma maestra de la esencia, el entramado urbano, pleno de callejas, recovecos, iglesias y conventos, encontraba en las puertas el culmen del cerrazón que imponía el pasado. Por añadidura, toda la revolución es el despertar de un mundo nuevo, en el que el pasado es valor en desuso, que solo merece el premio de ser superado y abolido*<sup>2433</sup>.

En el propio proceso revolucionario podemos encontrar algunos personajes de renombrado prestigio como Fernández de los Ríos que defendería la labor que se estaba produciendo en aras a la modernidad con la transformación del tejido urbano, como se comprueba en las páginas publicadas en 1868 en su obra *El futuro Madrid: El ornato y la higiene de Madrid reclaman imperiosamente la demolición de ciertas iglesias bajo todos los puntos de vista. Es necesario que haya más ensanche, más plazas, y por consiguiente más aire y más desahogo*. En las páginas de las revistas decimonónicas de este periodo se palpaba el ambiente contrapuesto que se estaba viviendo entre aquellos que opinaban una conservación de los bienes inmuebles religiosos, más por su papel espiritual que por un supuesto interés histórico y artístico, y los que optaban por una lectura transformadora de la ciudad en aras a su modernidad, como lo demuestra las páginas dedicadas al derribo propuesto por la Junta Revolucionaria del Convento de las Calatravas de Madrid en la revista *La Ilustración española y americana* del 25 de marzo de 1870: *No hace muchos días que se ha suscitado en la Cámara Popular un animado debate acerca del proyecto de derribo del convento de las Calatravas. Con este motivo, en todos los círculos y reuniones particulares, se han reproducido los debates entre los que desean la edificación de nuevas casas en el hermoso terreno que hoy ocupa el convento, y los que por amor a sus recuerdos sienten su demolición y no quisieran que se llevara a efecto. No es nuestro ánimo apoyar los que opinan en este asunto a favor ni en contra de la demolición del convento: comprendemos las razones que a todos les asisten, pues si bien es cierto que la apertura de una nueva calle desde la de Alcalá a la del Caballero de Gracia y la edificación de un elegante grupo de casas embellecería mucho aquel hermoso sitio, no se nos oculta la tristeza que infunde en otros la desaparición de un templo donde tantas veces y con tantas solemnidades se han celebrado los oficios divinos (...)* No queremos entretener al lector refiriéndole los

---

<sup>2432</sup> DE LA FUENTE MONGE, Gregorio, 2001, p.131.

<sup>2433</sup> MACARRO, J.M. "Federico Rubio, político y parlamentario. Una manera de entender la Revolución", en *Medicina y Sociedad en España del siglo XIX. Una aproximación a la obra de Federico Rubio y Gál.* VV.AA. Cádiz, 2003.

*variados comentarios que oímos, no solo en el portal donde estaba de manifiesto la esposicion pidiendo al Gobierno la conservación del edificio, sino también en los corrillos que se formaban en su parte exterior (...) Y es natural: aun los que desean que la piqueta primero y después la arquitectura y las artes auxiliares, transformen aquel sitio en una elegante agrupación de magníficas y elegantes casas dignas de aquel hermoso sitio, no pueden menos de enviar su adiós postrero a un edificio que respetaron nuestros padres, y que al fin es aun la casa de Dios desde la que hemos enviado nuestras oraciones*<sup>2434</sup>.

Granada fue una de las ciudades más castigada al respecto, como lo prueba el derribo de la iglesia de San Gil decretada por el nuevo Gobierno Provisional. Ya años anteriores se había proyectado algunos planes de demolición, como el presentado la propia Comisión de Ornato el 29 de marzo de 1862 que plantearía la confección de una nueva plaza tras el derribo del templo, a lo que se opondría el Gobierno Provisional. Tras la Revolución, el plan de demolición se pondría en marcha, con la oposición de la Comisión de Monumentos, que abrió una amplia polémica con el Ayuntamiento de la ciudad. El historiador Gómez-Moreno en un estudio dedicado a la pérdida del patrimonio de la ciudad de Granada, *Breve reseña de los monumentos y obras de arte que ha perdido Granada en lo que va de siglo*, publicado en 1884, afirmaba que *La misma Excma. Corporación, de acuerdo con la junta de Gobierno revolucionaria, dispuso echar abajo la iglesia de San Gil en octubre de 1868. Este edificio, de bellas proporciones, tenía preciosas techumbres mudéjares y magníficas y elegantes portadas de renacimiento, esculpidas por Diego de Siloé. Al ser llamada la Comisión de Monumentos al lado de la Corporación municipal, hizo algunas observaciones de palabra y por escrito, encomiando las bellezas que ostentaba el edificio y manifestando la pérdida que sería para las artes su demolición. Fuéle contestado que no podía atenderse sus observaciones, porque el acuerdo era irrevocable, y que se le había llamado sólo con el fin de autorizarla para que retirase aquellos fragmentos del edificio, que creyeran podían figurar en el Museo para la enseñanza, como si las obras de arte estuvieran mejor en otro sitio que en aquél para el cual se hicieron y donde realmente se enseñan e ilustran*<sup>2435</sup>. El nuevo proyecto de alineaciones se lo encargarían al arquitecto municipal José María Mellado, que lo habría concluido el 14 de octubre de 1868, produciéndose el derribo final en agosto de 1870. Posteriormente nacería ya en 1872 la popular Plaza Nueva. Otro ejemplo claro de urbanismo precipitado sería la demolición parcial del Palacio Arzobispal para que se ganara visualidad de las calles adyacentes. Incluso en la ciudad de Cádiz se asistiría a derribos de edificios religiosos para la configuración de plazas, como fue el caso del convento de la Candelaria, que paradójicamente ya Madoz en su *Diccionario* publicado entre 1845 y 1850 informa que *cuando, según leyes vigentes, llegue el caso de la supresión del convento de la Candelaria, debería procederse inmediatamente a su demolición, a fin de completar*

<sup>2434</sup> El texto aparece publicado en *la Ilustración Española y Americana*, Año XIV, Nº 7º, 25 de marzo de 1870.

<sup>2435</sup> GOMÉZ MORENO, Manuel *Breve reseña de los Monumentos y Obras de arte que ha perdido Granada en lo que va de siglo*. Granada, 1884, p.21.

*una hermosa plaza, en la que ahora es pequeña e insuficiente, ya por lo que respecta a la salud pública, como a la seguridad de las personas que transitan por las estrechas calles que dan al convento*<sup>2436</sup>.

La llegada de la Revolución de 1868 en el ámbito sevillano no pasará desapercibido para los avatares del urbanismo hispalense. Suarez Garmendia señala que el año 1868 no afectaría en sí a la teoría arquitectónica pero las actuaciones producidas en la ciudad serían definitivas, ya que las transformaciones urbanas a partir de ahora será más rápida y más incisiva a consecuencia de nuevos planteamientos políticos, del cambio paulatino que se produce en las clases sociales y de las nuevas necesidades que surgen en el aspecto material que van desde los planteamientos higienistas, de instrucción y filantrópicos hasta los de crecimiento demográficos e industriales<sup>2437</sup>. Las actuaciones del ayuntamiento sevillano siguiendo a Suarez Garmendia tendrían el sello propio de la revolución con lo que esto significa de ruptura con el anterior sistema. Generalmente la exaltación producida por la represión dará lugar a actuaciones sin meditar, cargadas de fuertes dosis de simbolismo, lo que produjo frecuentes equivocaciones imparables. Pero también es cierto que en estos periodos turbulentos, muy frecuentes por otra parte en el siglo XIX, es cuando al socaire de tan decantada idea revolucionaria del progreso se sentará las bases para las futuras transformaciones que fueron verificándose paulatinamente en posteriores actuaciones cuando los ánimos estaban más calmados<sup>2438</sup>. A lo que añade que en este periodo produce una fuerte transformación urbana como consecuencia de los derribos, que la arquitectura experimenta un cambio material con la inclusión de nuevos elementos, como el hierro y el cristal, que se agudiza el funcionalismo de las nuevas construcciones lo cual modifica profundamente la tipología de las mismas con la aparición de mercados, estaciones, edificios industriales y la transformación del caserío<sup>2439</sup>.

No cabe duda que las actuaciones del ayuntamiento sevillano no contarían con una planificación urbanista previa coherente sino que la improvisación fue lo que verdaderamente marcó la actuación en muchos momentos, lo que si estaba claro en Sevilla era la rapidez con que había que destruir. Los derribos de un gran número de edificios religiosos y civiles en muchas ocasiones sin saber realmente porque se hacían provocaría un rechazo desde muchos sectores de la población, bien por posiciones religiosas, bien políticas o incluso simplemente por sus concepciones estéticas que defendían una imagen tardorromántica de la ciudad. Lo que queda claro es que las medidas renovadoras de carácter urbanístico que fueron adoptando los ayuntamientos revolucionarios quedarían empañadas negativamente en la retina del paso del tiempo. Sin embargo no cabe duda de que algunas de ellas

---

<sup>2436</sup> Sobre los derribos conventuales en la ciudad de Cádiz, ESPIGADO TOCINO, Gloria *La primera República en Cádiz. Estructura social y comportamiento político en 1873*. Sevilla, Caja Provincial San Fernando de Sevilla, 1993.

<sup>2437</sup> SUAREZ GARMENDIA, José, 1986, p. 227.

<sup>2438</sup> SUAREZ GARMENDIA, 1986, p.227.

<sup>2439</sup> SUAREZ GARMENDIA, 1986, P.227.

abrieron el camino para la nueva concepción urbanística que iría moldeando a la urbe hispalense. Evidentemente las medidas urbanísticas de la Revolución de 1868 que posteriormente se va a proseguir en la Restauración contarían con la oposición de algunos sectores de la ciudad, bien por parte de instituciones culturales, como la Comisión de Monumentos o la propia Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

La participación de Mateos Gago en la Comisión de Monumentos durante la Revolución de 1868 y su oposición a las medidas urbanísticas adoptadas por el ayuntamiento revolucionario encabezado por Federico Rubio lo convierte en uno de los paladines indiscutibles de la defensa del patrimonio histórico-artístico. Sus textos insertados en Opúsculos bajo el título genérico de *la cuestión de los monumentos* es sin duda el testimonio de un testigo ocular de los hechos. La carta de renuncia como miembro de la Comisión enviada a la Real Academia de San Fernando manifiesta su pesar por los avatares producidos a raíz de la Revolución en Sevilla: *Cincuenta y siete iglesias se mandaron cerrar en Sevilla; se suprimieron parroquias, so pretexto del ensanche de las calles se derribaron templos monumentales, algunos de ellos situados en espaciosas plazas; y para el embellecimiento de la ciudad se lanzó brutalmente a las religiosas de sus conventos, dedicándose luego estos edificios a almacenes, tabernas, corrales de vecindad y casas de prostitución. El lujo de barbarie y grosería que se desplegó en la traslación de las religiosas fue tal, que no hubo consideración ni a las ancianas encorvadas bajo el peso de sus años, ni a las enfermas ya sacramentadas y en las puertas de la muerte; y mientras los incautadores robaban cuadros, esculturas y riquísimas vestiduras sagradas, se prohibía sacar lo suyo a las religiosas, registrándolas escrupulosamente. Desaparecieron las cruces e imágenes sagradas que se conservaban todavía expuestas a la pública veneración en muchos puntos de la ciudad (...) Por regla general estos objetos fueron destruidos: algunos que otro, como la Concepción venerada de antiguo en la calle de la Borceguinería, se mandó tapiar, por la resistencia que a su destrucción opusieron los vecinos; sobre el tabique que cubre la antigua pintura, se ha colocado hoy, embelleciendo el sitio, un magnífico letrero, anunciando la instalación de una taberna que se ha puesto al costado. Ni la belleza artística ni el interés histórico fueron bastante a salvar edificios y objetos preciosísimo de aquel diluvio de barbarie. Las corporaciones científicas, y especialmente la Comisión de Monumentos históricos y artísticos en cumplimiento de su instituto, reclamaron en valde<sup>2440</sup>.*

Alerta al Presidente del a Real Academia de San Fernando de la pérdida monumental que estaba padeciendo la ciudad hispalense: *No habla el Sr. Gago en nombre de la religión; no habla como sacerdote, sino como amante de las artes, como persona ilustrada, como español celoso de las glorias de su patria. A continuación da una descripción de aquellos monumentos significativos que van ser derribados o ya lo habían sido por la ligereza de la piqueta. En relación*

<sup>2440</sup> MATEOS GAGO, Francisco *La cuestión de los derribos Opúsculos*, Sevilla, Antonio Izquierdo, 1869-1887; GABARDON DE LA BANDA, José Fernando *Los opúsculos de Mateos Gago*, Sevilla, 2012.

a las puertas de Sevilla proyectada para su eliminación, se centra en de Triana y de San Fernando precisando que *desde el primer acuerdo de la Junta revolucionaria comenzó el derribo del arco llamado Puerta de Triana, siguiendo luego el de la Puerta Nueva de San Fernando. V.E. conoce los esfuerzos que de tiempo atrás venía haciendo esta Comisión, ayudada de todas las corporaciones científicas de esta Ciudad y apoyada por esas Reales Academias, para conservar esos arcos, que tanto hermoseaban sin estorbar a nadie, especialmente el primero, que reputado y reputado su derribo como de ladrillo por los maestros de la junta revolucionaria, ha resultado luego de magnífica sillería. Algo más sensibles son las pérdidas en la puerta de San Fernando bajo el punto de vista monumental; pues no consiguiéndose objeto alguno para el ensanche, como era claro, con el derribo de la puerta, se están demoliendo hoy los grandiosos y pintorescos torreones que formaban sus dos costados, y que, procedentes de la antigua muralla, caracterizaban a esta Ciudad no menos que la Giralda y la Torre del Oro*<sup>2441</sup>. Las actuaciones que se hicieron sobre el patrimonio conventual en algunos momentos severas no lo dejarían indiferentes<sup>2442</sup>. En el caso del derribo del monasterio de las Dueñas lamentaría *quemucho han perdido las bellas artes en uno y otro local, especialmente en las Dueñas, por el deterioro de sus grandiosos retablos de medio relieve, como que han permanecido en su sitio hasta llegar el derribo de las paredes a esas obras del Renacimiento, algunas de cuyas piezas habían servido para alimentar la lumbre en que se calentaban los custodios de los materiales derribados, según me asegura, como testigo de vista, un individuo del ayuntamiento. Incluso en algunas ocasiones llevaba incluso a su parcial derribo, como en el caso del Monasterio de Madre de Dios, siendo criticado duramente por Gago: Derribándose está el convento que fue de monjas de Madre de Dios, y al suelo ha venido ya una mitad separada del resto del edificio por una calle con un arquillo. Es decir, que desapareció para siempre lo que fue casa-apeadero y habitación de Isabel, la Católica en Sevilla. Mañana continuando el derribo, caerá la iglesia de este convento, y con ella su artesonado incomparable, maravilla del arte, con que Sevilla puede ufana desafiar a todas las obras de su género. Algunas parroquias mudéjares significativas sufrirían los efectos de la piqueta, como fue el caso de la iglesia de San Juan de la Palma, que sufrió importantes pérdidas: Ha sido rota la histórica lápida árabe que existía en un muro exterior de la parroquia de S. Juan Bautista, vulgo de la Palma, en elegantísimos caracteres cúficos de relieve. En adelante los vecinos de aquella plaza no se verán honrados con las visitas continuas de nuestros aficionados y de los orientalistas extranjeros, ni presenciarán aquellas animadas y frecuentes controversias filológicas a la vista del monumento. No sé quien será responsable de este accidente. Nuestra Comisión había pedido la piedra para el Museo Arqueológico; ayer existía esta dentro de la iglesia, dividida en tres partes, y a su lado partida por la mitad, la piedra que tenía la traducción.*

---

<sup>2441</sup> MATEOS GAGO, Francisco, 1869-1887, p.100.

<sup>2442</sup> Un interesante estudio de la pérdida del patrimonio conventual en estos años, FRAGA IRIBARNE, María Luisa *Conventos femeninos desaparecidos: arquitectura religiosa perdida durante el siglo XIX en Sevilla*, Sevilla, Guadalquivir, 1993.



Sin embargo sería en el derribo de la parroquia de San Miguel donde Mateos Gago se explayaría con mayor intensidad en su defensa: *Apenas entró allí la piqueta destructora, cuando la Comisión de Monumentos elevó al señor Gobernador la comunicación fecha 5 del presente (...) Al siguiente sábado 7 acudieron a aquel templo comisiones de todas las corporaciones de la ciudad, para presenciar la exhumación de los restos del sabio sacerdote D. Rodrigo Caro. Entonces, vieron los sevillanos toda la belleza de aquel templo, porque destruido ya el inmenso y pesado retablo de madera en qué manos bárbaras habían colocado el altar mayor en épocas pasadas, aparecía en toda su lindeza el ábside de tres caras con ojivas góticas que cerraban la gran nave. Entusiasmados los circunstantes, nombraron una Comisión compuesta de hombres de ideas avanzadas en política, para que en representación de las corporaciones todas allí reunidas, fuesen a suplicar al señor Gobernador civil, D. Luis Moliní, que se suspendiese aquel derribo, que afortunadamente aun no había tocado al casco de la obra antigua, y si solo a las adherencias posteriores. Se detallaba la verdadera realidad de las medidas desorbitadas por el Ayuntamiento, el expolio de múltiples objetos artísticos por parte de particulares y entidades que sin ningún tipo de escrúpulos terminaría endosando su colección particular o en venta fraudulenta en mercados privados: Las alhajas, pinturas y esculturas mudaban de domicilio y el silencio y acompasado andar de sus conductores nos traían a la triste memoria las horribles noches de las grandes epidemias coléricas. Todo se ha hecho con precipitación y desconcierto, y esté seguro V.E. de que la galería de cualquier particular puede enriquecerse tanto y más que el Museo en estas circunstancias. Algún periódico ha instado más de una vez para que se publique el inventario de los objetos incautados: exigencia inútil; en la mayor parte de las iglesias se ha verificado la incautación, sin la formalidad del inventario, y los incautadores en cuyo poder están las llaves, abren cuando quieren y sacan objetos que conducen a donde les manda. Cierto es que se ha nombrado una comisión de la Academia de Bellas Artes para que recoja los objetos incautados que a su juicio lo merezcan con destino al Museo: pero esta Comisión a mas de no haber podido examinar los objetos ya distraídos, no se ha nombrado para evitar el derribo de edificios, que bajo todos aspectos valían más que los objetos en ellos contenidos<sup>2443</sup>. Los hechos narrados por Francisco Mateos Gago están ratificados al mismo tiempo por los que Joaquín Tassara recogería en su célebre *Apuntes*, o incluso el propio Menéndez Pelayo, pero curiosamente los periódicos locales no dieron amplias noticias sobre la cuestión, como fue el caso de *La Epoca*, *El imparcial*, *El Universal* o *La Andalucía*, bien por sus cercanías políticas al ayuntamiento revolucionario, bien porque en cómo podríamos pensar el presbítero había desvirtuado en cierto modo los hechos, cuestión abordada por Rafael Raya en su monografía dedicada a la Revolución de 1868 en Sevilla<sup>2444</sup>. Lo que no cabe duda es que a pesar de las medidas de este momento puedan ser discutible se estaba abriendo el camino hacia una mirada de modernidad de la ciudad, que impulsaría Federico Rubio y el*

<sup>2443</sup> MATEOS GAGO, Francisco *Opúsculos*, T.1, 1869, p.134.

<sup>2444</sup> RAYA RASERO, Rafael *Historia secreta de los derribos de conventos y puertas de Sevilla durante la Revolución de 1868*. Sevilla, Asademes, 2006.

arquitecto municipal Juan Talavera, que serían criticados por la pluma irónica de Francisco Mateos Gago, llegando a ser objeto de discusión en las propias Cortes. Un amplio debate urbanístico se había abierto entre los paladines de una modernidad que necesitaba la ciudad y los que defendían todavía la imagen de una ciudad conventual, muchas veces más por sus convicciones religiosas que estéticas, como puede ser el caso de Francisco Mateos Gago.

Sin duda alguna una de las controversias más significativa que se produjo en la Sevilla revolucionaria de 1868, fueron las protagonizadas por Mateos Gago y Federico Rubio, dos personajes de indudable valía cultural que en cierta manera representaban en sí mismo los dos modelos de ciudad que en este momento se estaban enfrentando, el del carácter tradicional, inspirado en lo que llamaban sus rivales en el neocatolicismo, fundamentada en una morfología de ciudad conventual, y otra la aparentemente moderna, inspirada en la idea de una sociedad civil que desarrollara sus vidas en una urbe dinámica, que superara los moldes tradicionales de la ciudad histórica, para lo que defendía la demolición de calles y edificios que significaran una barrera a la expansión moderna de su perímetro. Federico Rubio pronunciaría un discurso el 27 de febrero de 1869 a las Cortes Constituyentes justificando el derribo que el ayuntamiento sevillano revolucionario iba a proceder en la ciudad, aludiendo a la modernización que necesitaba la urbe a fin de superar la concepción de ciudad conventual que en su estructura morfológica aún presentaba. La concepción que planteaba Federico Rubio sobre la ciudad del momento era la típica del modelo conventual, del que recogemos sus palabras: *La ciudad de Sevilla es un pueblo que presenta el aspecto de la vida monástica. Calles y barrios están constituidos por iglesias, por capillas y monasterios. La forma, señores, las formas en las cosas revela su esencia. Cuando veáis un pueblo sembrado de iglesias y conventos superiores a los que las necesidades espirituales exigen, decid sin vacilar: este es un pueblo en que el espíritu clerical tiene una gran preponderancia*, por lo que justificaba la necesidad de una intervención en su morfología. Sin embargo, comenta que hasta este momento había sido imposible la reducción de parroquias y la eliminación de capillas que se habían establecidos por la norma vigente en el Concordato, debido a la fuerza que el neocatolicismo había cobrado en la vida de la ciudad: *El Concordato había reducido un cierto número de parroquias en Sevilla. Sin embargo, los Gobiernos anteriores no lo llevaron a efecto. El neo-catolicismo se opuso a que llevase a efecto, como ha hecho siempre con todas sus cosas y sus leyes cuando no le conviene. La Junta de Sevilla, que vio llegado el momento de reducir las parroquias al número que correspondía a esa ley internacional, al Concordato, determinó al afecto la supresión de algunas iglesias parroquiales; mandó disminuir el número de conventos de monjas; y cuenta, Sres. Diputados, que anduvo en esto tan parca, que el suprimido por esa misma junta revolucionaria es menor del que correspondía al ordenado por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, y por lo cual yo me congratulo*<sup>2445</sup>. El gran número

---

<sup>2445</sup> RUBIO, Federico Cortes Constituyentes de 1869, 27 de febrero de 1869, N. 14, p. 229.

de iglesias y conventos que entonces poseía la ciudad de Sevilla era un verdadero obstáculo para las pretensiones urbanísticas del nuevo gobierno revolucionario, por lo que se mandaron demoler algunas iglesias que se consideraban perjudiciales para la población, bien por higiene, bien por ornato y hasta las buenas costumbres: *Existía, además, una multitud de capillas, cuyo culto absorbía el culto parroquial, dándose el caso de que era sumamente difícil, como no fuese a horas muy determinadas, encontrar iglesia parroquial a donde poder asistir al sacrificio de la misa. Basta decir que el número de iglesias, conventos y capillas subían por encima de cien; se mandaron cerrar, la cual no obsta que hoy ya se encuentren casi todas abiertas. Se mando demoler algunas iglesias que eran perjudiciales a la higiene, al ornato y hasta las buenas costumbres, porque dispuestas de modo que formaban encrucijadas y callejones solitarios, eran ocasión de crímenes y excesos; todo el que conozca Sevilla sabe que hay nombres como el callejón de San Andrés, que va asociado a una porción de robos y asesinatos.(...).*

Hizo un hincapié especial al derribo de la iglesia de San Miguel de Sevilla, ya que *interceptaba una plaza central de la ciudad, bien pequeña hoy para sus necesidades, en obsequio al ornato y a la higiene.* El verdadero obstáculo se encontraba en los sectores neocatólicos que proliferaban en la ciudad, quienes se habían opuesto a toda medida modernizadora por lo que no tuvieron más necesidad que atacarles: *La revolución de Sevilla se vio en la dura, en la imprescindible necesidad de combatir el espíritu clerical: esto era preciso, señores, era indispensable, porque en aquella provincia tiene una grandísima preponderancia el elemento neo-católico. Es más: hoy mismo hay allí solamente dos poderes, nuestra fuerza y el del neocatolicismo. Frente a frente en la revolución necesitábamos quebrantar su poder, necesitábamos atacarle, imposibilitarle, para que después de pasados los primeros momentos no nos destruyese*<sup>2446</sup>. Además arremete contra Francisco Mateos Gago, quien en la carta de dimisión de la Comisión de Monumentos había empleado duras referencias sobre su persona *¡Vandalismo en Sevilla! Esto fue el título del primer artículo, y principal, publicado contra nosotros y acogidos por casi todos los periódicos, artículo que es del estilo de los que suelen escribir en un papel que conocéis. Fue motivado por la comunicación de un sacerdote, y le doy preferencia, Sres. Diputados, porque el a que me refiero es un hombre de bien, es más, es un amigo mío, un sacerdote verdaderamente extraviado por la ira y el encono que suele apoderarse de los ministros del altar cuando los mueve lapasión política. Dicho documento es la dimisión que presentó del cargo de socio de la Comisión de Monumentos (...)*<sup>2447</sup>. La demolición de un arquillo correspondiente al convento de Madre de Dios se considera una necesidad, ya que se habían convertido en un verdadero obstáculo para la nueva concepción urbanística de aperturas de espacios públicos para una más óptima movilidad. Con respecto a la crítica de Gago, Federico Rubio responde en estos términos: *Señores, hay que advertir que estos arquillos que en aquellas estrechas, tortuosas y pequeñas calles de Sevilla cruzaban del muro de una pared a la opuesta, proyectando sombras tenebrosas y sirviendo de receptáculos de inmundicia, se han procurado*

<sup>2446</sup> RUBIO, Federico, 1869, p. 229.

<sup>2447</sup> RUBIO, Federico, 1869, p.230.

*derribar, no solo por los revolucionarios, sino por todos los hombres medianamente ilustrados, y sin embargo, esos arquillos han quedado siempre en pie. Y es la causa de esto, señores, el que han sido sostenido por la influencia clerical, que siempre ha opuesto obstáculos y dificultades a la administración, a los gobernadores civiles, a los ayuntamientos, a todas las corporaciones, a fin de que no desaparecieran (...)*<sup>2448</sup>. Sin duda alguna el edificio religioso que derriban los revolucionarios que daría más polémica en el seno de la sociedad sevillana sería la iglesia mudéjar de San Miguel, por lo Federico Rubio intenta justificar ante los diputados de la medida adoptada por las autoridades municipales. Para los revolucionarios la iglesia, aunque mudéjar, no presentaba caracteres estilísticos, por lo que no se consideraba digna de conservarse, además de encontrarse en un enclave particularmente excepcional para la apertura de la ciudad. Recogemos las palabras pronunciadas por Federico Rubio sobre la iglesia de San Miguel: *En efecto, la iglesia de San Miguel es de estilo mudéjar. Es un estilo híbrido, es una mezcla del árabe decadente y del ojival que comienza a renacer; casi todas las parroquias de Sevilla son mudéjares, y hay la particularidad de que si hay alguna iglesia mudéjar poco importante era la iglesia de San Miguel. Empotrada en una porción de casas, oficinas de sacristanes, y de las que suelen afean nuestras iglesias, no presentaba nada notable al exterior. Cuando hay en Sevilla templos mudéjares dignos de mucha mejor consideración*<sup>2449</sup>. Al mismo tiempo el hecho de ser un edificio de corte mudéjar no debía de ser un impedimento para su derribo, ya que en estos términos nunca se podría llevar a cabo la nueva ordenación urbanística: *Y señores, ¿Con conservar cinco, siete o diez no había bastantes? ¿Qué más respeto se quiere para el arte? Buscaban, pues, solo un pretexto. Pero hay más; si por respeto al estilo o al orden de la arquitectura no se pudiese derribar un edificio, no sería posible la mejora de ninguna población, pues el que no es dórico es jónico, y el que no, es de orden compuesto, etc. De modo, que si a esto solo se atendiera no podríamos poner la palanqueta en ninguna parte de la superficie del mundo. Lo que importa es saber si en aquel orden, en aquel estilo, hay una cosa artística digna de veneración y que merezca conservarse, pues hay edificios en todos los órdenes y estilos, malos e insignificantes. Y así era el de San Miguel comparado al de San Estaban y a otros varios, completos, característicos, unidos a sus torres semejantes a castillos, con sus almenillas, sus ventanas ojivales y el ábside mejor y más notorio que el que tanto dolor ha ocasionado*<sup>2450</sup>.

El 2 de marzo de 1869 sería enviada una carta a Federico Rubio como réplica de su discurso pronunciado en las Cortes Constituyentes el día 27 de febrero de 1869. El ornato, la higiene no podían ser excusas para el derribo de los edificios religiosos, como según el presbítero sevillano, pretendían los revolucionarios: *Se mandó derruir algún templo por razón de ornato, de higiene, y aun de respeto a las buenas costumbres. <Algún templo> dice V! No he contado los que debieran destruirse con arreglo a la famosa lista de los 57 condenados por la Junta para respetar la Religión de nuestros Padres, pero puedo decir que de las nueve*

---

<sup>2448</sup> RUBIO, Federico, 1869, p.230.

<sup>2449</sup> RUBIO, Federico, 1869, p. 230.

<sup>2450</sup> RUBIO, Federico, 1869, p.231.

*parroquias mudejáricas que yo cuento en Sevilla ha quedado abierta al público una sola, la menos caracterizada, la que tiene casi restos de mudéjar; tres fueron destinadas a clubs o escuelas, y las otras cinco, las mejores escogidas como por mano maestra, muchas de las cuales conoce el mundo por los dibujos publicados por el Gobierno en la <Historia de los monumentos del arte en España> y cuyas iglesias están declaradas glorias del arte nacional por los arquitectos e inteligentes de toda Europa, esas fueron condenadas a la ilustrada piqueta de V. que con su discurso se hace, si ya no lo era, el reo principal de las ruinas de Sevilla. Las razones que V. alega para legitimar su obra son completamente falsas. Los mejores de esos templos están en plazas o calles anchas como San Marcos, Santa Marina, Omnium Sanctorum, San Miguel y San Andrés. Si el último forma un estrecho angostillo, es precisamente porque a su ábside el más elegante de los mudéjares, lo han estrechado con la pared del corralón y casucha de enfrente, que por cierto está ruinosa y hasta denunciada. Si las escenas de robos y asesinatos que puedan ocurrir en las calles son para V. motivo de la destrucción de sus edificios, ensanche V. más la plaza nueva donde fue robado el inocente niño asesinado luego en el Tagarete (...). <El ornato, la higiene..!> Falso. Santa Inés fue uno de los primeros conventos que se mandaron desocupar: pero allí tiene V. una parienta y otra un Señor de los de mayor importancia en la Revolución; y se acudió a V. y al otro Sr. y las monjas quedaron en su casa, alegrándose yo mucho, tanto por aquellas pobres Sras., cuanto porque el edificio es monumental. Otros infelices lo pagaron, porque no era la higiene la regla que en esto se seguía, sino el capricho de llenar un número fatal. De manera que en sí en cada convento o iglesia hubiese V. tenido una parienta, de seguro se llevan chasco <el ornato, la higiene y aun el respeto a las buenas costumbres><sup>2451</sup>.*

En alusión a San Miguel, Mateos Gago insiste en el valor artístico del edificio mudéjar, por lo que no era justificable su derribo en orden a abrir una pequeña plaza. La defensa del Padre Gago es vital para comprender la concepción patrimonial del edificio derribado: (...) *He llegado por último a los párrafos que V. dedica a S. Miguel y después de llevarme escribiendo dos días sobre ellos, me encuentro que nada puedo decir, porque los amigos de V. y míos individuos de la Comisión de Monumentos con quienes hablé en la sesión de anoche, me prohíben que discuta con V. sobre el particular (...). Dice V. que <S. Miguel era un templo pequeño.> Es claro; y ahí están en pie todavía sus cuatro paredes pregonando lo que V. dice (...) <S. Miguel interceptaba la plaza...> Si, como la Fabrica del tabaco intercepta el Prado de S. Sebastián y el Palacio que fue real en Madrid obstruye a la Plaza de Oriente. Precisamente S. Miguel daba alguna regularidad a esa plaza ocupando la cabeza de aquel cuadrilongo; tanto que hasta en los periódicos de V. se pide ahora que se acabe aquel derribo y se edifique algo en su lugar; porque es claro, Sr. de la higiene y del ornato público, ¿Cómo se ha de consentir una plaza de 50 a 60 metros de ancho por 500 o 600 de longitud? Que la iglesia estaba <empotrada en casas y oficinas de sacristanes>; quiera Dios que no se le ocurra a V. hablarnos de la Giralda en otro discurso, porque de seguro nos va a decir que está colgada de las campanas. <S. Miguel era insignificante bajo el aspecto arquitectónico...Hay la particularidad de que si hay alguna iglesia mudéjar poco importante era la iglesia de S. Miguel., el ábside de S. Esteban por ejemplo, es mejor*

<sup>2451</sup> MATEOS GAGO, Francisco *Opúsculos*, Sevilla, 1869, p.65.



*y más notorio que el de S. Miguel...> Pues yo creía que los dos ábsides, perfectos cada uno en su clase, debían conservarse como representación de distintas épocas y que cualquiera de las ojivas de S. Miguel como valía más que todo el de S. Esteban. Creía tan importante el templo de S. Miguel, como que fue el último de los mudéjares, la perfección de aquel arte, el paso franco al ojival, como dice V. copiando mi primer escrito, labrado en los tiempos de D. Pedro de Castilla por los mismos que levantaron la suntuosa fachada de nuestro Alcázar. Me pareció haber visto allí un precioso ajimez, un arco de herradura y una capillita de triple arista como no hay otra en Sevilla: todavía creo ver sobre sus derruidas paredes las almenillas que V. pondera en los otros; su importancia para la historia del arte me parecía tan grande como que teniendo los otros edificios mudejáricos sus techumbres de maderas, solo S. Miguel tenía bóveda de ladrillo con múltiples y elegantísimas costillas de piedra que, arrancados de sus postes, entrelazaban magestuosamente todo el techo. (...) S. Miguel Sr. D. Federico, no ha muerto; para oprobio de V. y de cualquiera que haya tomado parte en esa demolición o pretenda defenderla, ha quedado una vista interior del templo, a mas de sus planos arquitectónicos, sacadas al óleo por el apreciable Maestro de la Academia D. Eduardo Cano, que como todos sus compañeros llora todavía sobre aquellas ruinas, sello funesto de la decantada ilustración de la moderna impiedad<sup>2452</sup>.*

Unos años después en 1874 nuevamente se referiría a la demolición de San Miguel, criticando que años después de la programación urbanística todavía no se había culminado su realización: (...) *Respecto a la iglesia de San Miguel de Sevilla (...) cuyas necesidades han quedado tan completamente justificadas, como que, aumentándose la fealdad de la plaza, por la exagerada longitud que siempre tuvo, con el derribo de la iglesia que estaba en uno de sus extremos, preciso vender el solar para levantar casas en él como se verifica en la actualidad<sup>2453</sup>*. Lo cierto es que los respectivos informes que se fueron elaborando años posteriores sobre la iglesia de San Miguel por parte de la Comisión de Monumentos de Sevilla e incluso desde la Real Academia de San Fernando ratificaba la posición conservacionista del Padre Gago sobre el templo mudéjar. Al mismo tiempo criticaría los derribos que se produjeron también en el ámbito de la arquitectura civil: *Por último y en cuanto a la destrucción de monumentos civiles nos dice V. que <esos monumentos son las puertas que estaban condenadas a la demolición por administraciones anteriores> Sobre lo que se me ocurre las siguientes reflexiones. 1º. Se equivoca V. en la mitad del número de las Puertas. 2º. Llama V <acuerdos de las administraciones anteriores> a los conatos de algunos ignorantes resistidos siempre por las Corporaciones científicas de la Ciudad>(...).*

El derribo de la iglesia sevillana de San Miguel produjo también una lamentable controversia entre el erudito sevillano y el entonces arquitecto municipal, don Juan Talavera, quien en principio culpó de haber dejado en la estacada la conservación del edificio. De ahí que el arquitecto sevillano

---

<sup>2452</sup> Mateos Gago, Francisco, Opúsculos, T.I, 1882, pp. 206-207.

<sup>2453</sup> Mateos Gago, Francisco Opúsculos, T. IV, 1879, p.82

publicara en el periódico La Andalucía un artículo con el título de *La respuesta de un vándalo a las verdades*, defendiendo su labor profesional en el asunto en ciernes. La carta comenzaba lamentando que Francisco Mateos Gago dimitiera de su cargo de vocal de la comisión: *Por una feliz causalidad llegó a mis manos un número de <El Pensamiento Español> que contiene la renuncia al cargo de vocal de la Comisión de Monumentos de esta provincia, hecha por el Sr. Pro. D. Francisco Mateos Gago. Nada estaba tan lejos de mi ánimo como tener que sincerarme de cargos en la cuestión de derribos de edificios, y nada también tan lejos de mí, como haber de desmentir al doctor respetable y al entusiasta arqueólogo; pero viéndome atacado de una manera dura e inconveniente por este señor, y viendo sobre mí la tacha de vándalo que los que me conocen saben que no me corresponde, preciso me será contestar por lo que a mí me toca, a los cargos que el señor doctor se sirve hacerme de su renuncia*<sup>2454</sup>. A continuación se intenta excusar sobre su papel en la demolición de los edificios que apunta Mateos Gago, especialmente en el caso de la demolición de la iglesia de San Miguel: *Ignoro completamente la historia de la demolición de los edificios religiosos de Sevilla: no habiendo presenciado los acuerdos, ni visto las actas, no me atrevo como el Sr. Gago, a narrar la tramitación de estos expedientes. Llamado a servir interinamente al Municipio cuando ya habían principiado algunas de estas obras, y otras estaban terminando, uno de mis primeros actos, fue la asistencia a una entrevista en la iglesia de San Miguel, a la que concurrió el Sr. Gobernador Civil, varios individuos del Municipio y una Comisión de la de monumentos de esta provincia: interrogado acerca de mi opinión sobre el mérito del edificio, manifesté en términos explícitos que me parecía un ejemplar precioso del estilo mudéjar, por más que lo tuviesen oscurecido las adiciones posteriores de mal gusto y el retablo que durante muchos años ocultó el bellissimo ábside. Ya cuando esta entrevista, no existía la solería de mármol que fue trasladada a San Lorenzo, y estaban demolidas en gran parte las capillas laterales y un trozo de la bóveda, en cuya operación debieron invertirse varios días, sin que el Sr. Gago ni otra persona o corporación elevasen reclamación alguna*<sup>2455</sup>. Al mismo tiempo Talavera expone los intentos de recuperación de la iglesia mudéjar y el coste que tendría que asumir el consorcio municipal, así como las supuestas obras de rehabilitación que tenían que proceder para salvar el inmueble y los bienes muebles contenidas en ella: *Hablóse en esta Comisión de la conveniencia de suspender el derribo o de continuarlo descartando al monumento de las adiciones que lo oscurecían; para esto se me pregunto cuánto dinero sería necesario, y en el acto, y sin formación de presupuesto ni otro dato que una ojeada, contesté que la restauración del templo costaría 5 o 6000 duros, lo cual nadie puso en duda ni contradijo, y siento que el Sr. Gago en un paréntesis, lastime mi decoro de arquitecto hasta sin conocimiento exacto de mis palabras. Conste, pues, que el Sr. Gago faltó a la verdad, cuando ha dicho, que, en mi opinión, debería gastarse 10.000 duros en la reparación de la iglesia de San Miguel. Conste que mi dictamen se refería a los fondos necesarios para aislar y restaurar el edificio mudéjar, y no a la reposición de lo derribado hasta entonces. Yo confío y excito para ello la caballerosidad de mis*

<sup>2454</sup> MATEOS GAGO, Francisco. La respuesta de un vándalo a las verdades del ilustrado Pro. Sr. Gago *Opúsculos*, T. 1. Sevilla, 1869, p.147.

<sup>2455</sup> MATEOS GAGO, Francisco, 1869, p.147.

*amigos y compañeros los señores Boutelou y Cano, que afirmando lo que dejo dicho, harán desaparecer de mis antecedentes de arquitecto y hombre honrado, la mancha que piadosamente quiere echar el P.Gago. Para que se forme idea de la exactitud del paréntesis en el que el Sr. Gago dice que había quien hiciera estas obras por 2.000 duros, baste decir, que la iglesia tiene un área de más de 600 metros cuadrados, que habría que solar de mármol, y que el costo de esta solería es cuando menos de 2.4000 duros; que ya no existía ningún altar, que habría que destruir la tribuna del órgano, el baptisterio vignolesco y la colecturía, que se deberían derribar la sacristía, sagrario, capillas, salas de cabildo y campanario, y cuando esto se hubiese ejecutado, restaurar las paredes y bóveda de la iglesia; admiro la competencia del autor del paréntesis del Sr. Gago; pero aseguro hoy que los 10.000 duros, no serían bastantes para esta restauración. Conste también que resuelto el derribo, se ocuparon en él al día siguiente 50 hombres, cuando llegaron a más de 800 los que trabajaban en Sevilla, y se verá que también faltó el Sr. Gago a la verdad a sabiendas, cuando afirma que se retiraron los operarios de los otros derribos, para apresurar el de S. Miguel. Espero, señor director, se sirva usted insertar en su periódico estos desaliñados renglones de un vándalo, y espero que el Sr. Gago, cuya hidalguía me es notoria, se servirá rectificar sus asertos en la parte que a mí me concierne*<sup>2456</sup>.

Mateos Gago responde a Talavera en sus Opúsculos sobre la mención que le había dedicado en la cuestión de los derribos: *Como se vé, el Sr. Arquitecto Municipal, no defendía, ni mucho menos, a los famosos derribadores en su anterior comunicación; ni desvirtúa en lo más mínimo ninguno de los cargos que yo había hecho contra la Junta y el Municipio a propósito de los derribos. Ni podría esperarse otra cosa, puesto que el Sr. Talavera había lamentado muchas veces como persona ilustre la barbarie de los demolidores, y se había opuesto tenazmente a sus descabellados propósitos; sin embargo la redacción de la Andalucía cogiéndose, como se dice vulgarmente, a un clavo ardiendo, abusó de aquel escrito y lo publicó en son de triunfo contra mí, como si el arquitecto hubiera hecho en él la apología de los bárbaros. Verdaderamente el Sr. Talavera siguió en este asunto el peor de los caminos. Si me hubiera pedido explicaciones, al creerse como equivocadamente creyó, ofendido en mi renuncia, se las hubiera dado pública y privadamente a medida de su justo deseo (...)*<sup>2457</sup>. A continuación insertaría en Opúsculos el texto que el periódico *La Andalucía* se negaría a publicar, del que extraemos algunos fragmentos: *lamento el desgraciado giro que ha dado V. a la cuestión del derribo de S. Miguel en su comunicado inserto en el periódico <La Andalucía> de ayer, y siento verme en la precisión de contestar, aunque sea poco, a los ataques de V. tan inesperados como bruscos (...)* Luego S. Miguel no era un edificio de primer orden, mudejánico, según V. confiesa, monumento del arte nacional de España? ¿Luego Sevilla no ha perdido una de sus más preciosas joyas, sin razón siquiera aparente, y solo por el capricho de cuatro ignorantes? (...)<sup>2458</sup>.

---

<sup>2456</sup> MATEOS GAGO, Francisco, 1869, p.148.

<sup>2457</sup> MATEOS GAGO, Francisco *Opúsculos* Tomo I, 1869, pp. 149-150

<sup>2458</sup> MATEOS GAGO, Francisco *Opúsculos*, Tomo I, 1869, p.151. La carta lo intentó publicar en el periódico *La Andalucía* sin éxito, fechada el 29 de noviembre de 1868.

### **1.2.2.2. Una leve respuesta legal a las demoliciones de conventos por parte de las Juntas Revolucionaria: El Decreto del 21 de octubre de 1868.**

En noviembre de 1868 fue enviada una circular a los gobernadores provinciales para que informasen sobre la destrucción que se había dado en los bienes inmuebles del Patrimonio Eclesiástico Monumental, aunque como en tantas ocasiones su efecto quedó prácticamente nulo. Su exposición inicial ya nos da idea del contexto desalentador del momento: *Después de una conmoción tan profunda como la que acaba de experimentarse, no debe parecer extraño que continúen sintiéndose por algún tiempo sacudimientos más o menos pronunciados; pero este fenómeno exige por parte de las Autoridades un aumento de celo y de prudente vigilancia, para evitar actos cuyas consecuencias puedan producir en lo sucesivo resultados perjudiciales.* Sin embargo, por parte de la autoridad pública se recuerda que un gran número de estos edificios son de interés general, por lo que el Gobierno *considera necesario evitar que se arruinen impremeditadamente los que pueden ser utilizados de modo provechoso, o que constituyan un monumento de riqueza artística o de gloriosos recuerdos históricos.* En el primer caso, a la Administración corresponde ser previsora, y no dejarse llevar de impulsos tal vez apasionados; es deber suyo convertir los edificios de que se trata en establecimientos de interés general; en segundo, no debe tampoco olvidarse un momento que esos monumentos contribuyen poderosamente a dar testimonio del brillo de nuestras artes, y de los grandiosos sucesos de nuestra historia. Ante este hecho, el Gobierno concedió la potestad pública a los Gobernadores Civiles sobre las Corporaciones Municipales en orden a evitar el derribo indiscriminado de aquellos edificios que en cierta forma podían ser de utilidad pública, por lo que se dispondría que *ordene a las corporaciones populares, para que antes de proceder al derribo de cualquiera de aquellos edificios de que se hallen incautadas, instruyan el oportuno expediente, a fin de que semejante medida quede bien justificada y se lleve a efecto con las formalidades que las leyes y disposiciones del Gobierno exigen.* Para ello los Gobernadores Civiles tendrían la obligación de estudiarlas condiciones artísticas e históricas de los edificios a que se alude, calculando el destino que dar sea posible a los que por dichas condiciones o alguna otra razón de interés público merezcan conservarse, proponiendo o realizando acerca de esto lo que en utilidad común le parezca más indicado, e impidiendo con su celosa intervención el daño de ruinas inconvenientes, sin caer tampoco en el extremo de una conservación sistemática, que pueda ser ofensiva a la sanidad y el ornato. Al mismo tiempo los Gobernadores Civiles debían emitir al Gobierno acerca de los edificios de que se trata, marcando sus circunstancias, y emitiendo razonadamente su dictamen respecto al destino a que convenga aplicarlos, suspendiendo hasta tanto cualquiera procedimiento que no esté ajustado a las insinuadas condiciones.

### **1.2.2.3. El papel de Reales Academias y las Comisiones Provinciales de Monumentos en la tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico desamortizado.**

Durante este periodo la Academia de Bellas Artes mantuvo su papel de protectora de los Monumentos Históricos y Artísticos como había sido tradicional en la legislación española, por lo que intentaría frenar la destrucción indiscriminada que se estaba cometiendo en estos años sobre todo tipo de bienes que configurarían el patrimonio monumental, que incluso el académico Eugenio de Cámara llegaría a afirmar que la Revolución *ha causado más destrozos acaso en dos o tres meses, que causó en algunos años la invasión extranjera*<sup>2459</sup>. La Academia de la Historia enviaría una circular, el 4 de noviembre de 1868, al Ministro de Fomento para que *tenga a bien dar las órdenes convenientes para que se conserven las Comisiones de Monumentos con su actual organización y preste a las mismas la protección que reclamen para el buen desempeño de sus importantes y útiles tareas*. Un mes después, la Real Academia de Bellas Artes enviaría una **Circular, fechada el 18 de diciembre de 1868** a los Vicepresidentes de las Comisiones Provinciales de Monumentos para que remitiesen listados de los monumentos que corriesen peligro de ser enajenados, vendidos o demolidos. Desde los primeros fragmentos del texto se exhortaba al Gobierno para que frenara lo sucesivos derribos que se estaban produciendo en estos meses en varias ciudades de España: *No cumpliría esta Academia, como es su más ferviente deseo, con el deber que les imponen sus Estatutos de atender a la conservación de todos los monumentos que, ya por su relevante mérito artístico, ya por los interesantes recuerdos históricos que a ellos van unidos, constituyen las brillantes páginas de nuestra pasada civilización, si no elevase solicitar su voz al Gobierno, cada vez que mira próximo a desaparecer uno de esos testigos de nuestras glorias. Nunca ha perdido de vista este noble cometido que la Nación le tiene conferido, y en la época presente ha elevado repetidas reclamaciones en este sentido (...) y si bien no ha conseguido evitarse todas, porque desgraciadamente se despliega siempre demasiada actividad en la fácil obra de la destrucción, ha tenido sin embargo la satisfacción de que el Gobierno provisional oiga con benevolencia sus indicaciones, las tome en consideración, y dicte en su consecuencia algunas órdenes particulares para casos también particulares, y una circular dirigida a todos los Gobiernos Provinciales con fecha 18 de noviembre próximo pasado, en que se dictan prevenciones generales, aplicables a todos los casos. Al mismo tiempo incita la colaboración de las Comisiones Provinciales a esta labor, ya que la propia Academia de San Fernando se veía impotente por ella misma: La Academia se propone redoblar sus esfuerzos, para conseguir su laudable objeto; pero, para poder hacerlo con perfecto conocimiento de causa, necesita de la cooperación de las Comisiones provinciales, sus naturales delegadas y colaboradoras, por lo que a ésta toca decirle cuáles son los edificios de su respectivo territorio que, ya por esta afectos a reformas o ensanches de las poblaciones, ya por alcanzarles los efectos de la reducción de comunidades religiosas, o los de la desamortización, se encuentren en peligro de ser demolidos o enajenados, y merezcan sin embargo respetarse o conservarse por su valor artístico o por su historia.*

---

<sup>2459</sup> CAMARA, Eugenio de *Resúmenes y tareas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando durante los años 1868-1869*. Madrid, Imprenta Manuel Tello, 1866, p.5.



A pesar de las convulsiones revolucionarias se tiene constancia de la funcionalidad de algunas Comisiones de Monumentos, a pesar de que no fueron atendidas. En algunos casos los testimonios son decepcionantes, como ocurrió con la Comisión de Barcelona, que *tuvieron que pasar las horas más amargas de su vida (...) luchando bravamente para evitar la corriente destructora de la piqueta, impulsada por quienes estaban obligados a escuchar la voz serena de aquellos y no consentir el funesto y lamentable despojo que sufría la ciudad*. En la ciudad condal, se perderían joyas góticas, como fue el caso de la iglesia de Santa María de Junqueras, que contenía importantes claustros, por el que el ayuntamiento planeó pasar una calle, y que a pesar de la oposición de la Comisión, el edificio se perdería. Se llegó incluso por parte de la junta revolucionaria a invitar a la Comisión para que asistiese el 21 de octubre de 1868 a los derribos de San Miguel y San Juan de Jerusalén<sup>2460</sup>. La actitud pasiva de las Comisiones Provinciales hizo que la propia Real Academia de San Fernando enviara el **16 de febrero de 1869 una circular** a los Vicepresidentes de las Comisiones Provinciales reiterando la petición de la Circular de 18 de diciembre de 1868, en la que se instaban a un mejor funcionamiento: *Siendo muchas las Comisiones provinciales de Monumentos que no dan señales de vida ni actividad, habiendo varias que ni contestan siquiera a las comunicaciones que se le dirigen por esta Academia, esta Corporación se ve en la sensible necesidad de excitar al celo de los Señores Vicepresidentes de las mismas para que si existen obstáculos que se opongan que ésta utilísima institución funcione y se desarrolle del modo que conviene al fomento de los estudios artísticos y arqueológicos, dediquen toda su intensidad y buen deseo a removerlos o allanarlos; y expongan a este cuerpo artístico, como Comisión Central y superior del ramo, sus deseos y necesidades, seguros de que procurará satisfacerlos por cuantos medios estén a su alcance*.

En el ámbito hispalense, la actitud de la Comisión de Monumentos no quedó totalmente impasible como lo prueba algunos oficios de traslados que fueron enviados al Gobernador Civil de Sevilla y al Alcalde del Ayuntamiento Revolucionario, como el fechado el 11 de junio de 1868, enviado al Gobernador Civil por el que se comunicaba que ante la desatención de la Junta Revolucionaria a que se oiga el parecer de la Comisión de Monumentos antes de proceder al derribo de los edificios eclesiásticos y públicos. Ya anteriormente como así consta en el propio oficio, la Comisión se había dirigido a la Junta Revolucionaria en fecha de 7 de octubre, suplicando *que en caso de que se acordase la demolición de algunas de los edificios en que estaban las parroquias, iglesias y capillas, que se informaran, se le oyese antes, para evitar que pudiesen destruirse monumentos de interés históricos y artísticos*. La Junta Revolucionaria contestaría con el oficio del 13 de octubre aceptando el ofrecimiento

<sup>2460</sup> Sobre la destrucción patrimonial en Barcelona a raíz de la Revolución de 1868, GRAHIT Y GRAU, Jorge *Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Barcelona: memoria de la labor realizada por la misma en su primer siglo de su existencia (1844-1944)*. Barcelona, 1947.

de la Comisión Provincial de Monumentos, *para que cuando procediera a la demolición de algún edificio que pudiese contener monumentos que interesase conservar fueran oídas las opiniones de la Comisión*. A pesar de ello la Junta Revolucionaria comenzaría a derribar algunos inmuebles sin conocer el parecer de la Comisión, por lo que nuevamente interpondría a la Corporación Municipal en bien de la conservación de todos los que puedan tener interés artístico e histórico, subrayando que debía ser consultada *antes de continuar las demoliciones empezadas, así se proceda a otras nuevas, para lo cual vuelve a repetirse se ofrece gustosísima, implicado con su cometido a evacuar los informes que se le pidan en un plazo breve, a fin de no entorpecer este servicio en aquellas partes que no tenga relación con el arte o con la historia, sin perjuicio de emitir dictamen acerca de todos los edificios que pertenecieran a las iglesias y capillas informadas bajo el punto de vista artístico*. Entre los inmuebles que la Comisión de Sevilla pediría su conservación estarían la iglesia de San Miguel, el artesonado de la iglesia del ex convento de Madre de Dios, los retablos de la iglesia del ex convento de las Dueñas, la capilla del ex seminario, la iglesia de San Marcos y su torre, así como las torres de Santa Catalina y Santa Marina. Un oficio posterior dirigido al Gobernador Civil de Sevilla y al Alcalde del Ayuntamiento Revolucionario fechado el **18 de noviembre de 1868**, especificaba cuáles eran los monumentos que, a juicio de la Comisión de Monumentos de Sevilla, podían ser demolidos o habían de conservarse, para lo que solicitaban el apoyo de la Real Academia.

### **1.2.3. Una incipiente tutela pública del Gobierno Provisional.**

#### **1.2.3.1. Las disposiciones legales sobre los edificios cedidos para uso público: La Orden de 9 de junio de 1869 y la Instrucción de 11 de mayo de 1870.**

El destino de un amplio número de conventos e inmuebles religiosos se intentaría resolver con la promulgación por el Gobierno Provisional de la **Ley de 9 de junio de 1869** por el que se dispondría la concesión en usufructos de edificios y terrenos de la Nación, por lo que aquellos conventos y sus huertos o terrenos adyacentes, y cualquier edificio cualquier otra procedencia pertenecientes a la Nación, que hubiera sido desinado o se destinase a oficinas de los Ministerios y de sus dependencias en las provincias, se entendería que lo haría en mero usufructo, aunque el Gobierno asumiría la potestad de destinarlos a otro servicio si cesare a aquel a que hayan sido aplicados (art.1). De la misma manera, los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, podría conceder inmuebles para servicios de su incumbencia y de utilidad pública, como eran hospitales, hospicios, casas de maternidad, establecimientos de Instrucción, cárceles, Casas Consistoriales, iglesias parroquiales, cementerios, Escuelas prácticas de Agricultura y otros establecimientos de igual o parecida índole, dedicados al fomento de cualquier ramo de instrucción o de riqueza pública (art.2). En el caso de que los referidos edificios y terrenos fueran pedidos por individuos o empresas particulares o por los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales para servicios de la provincia o de la localidad, que

podrían ser objeto de recreo, de especulación o de lucro, como parque, jardines, teatros, circos, plazas de toros o de abastos, y cualquier otro establecimiento de naturaleza semejante o análoga, se concederían en arrendamiento o se darán a censo (art.3). Todas las entidades públicas o privadas o particulares quedaban obligadas a costear las obras de reparación y conservación de los inmuebles cedidos; por lo que volverían a la posesión del Estado, en caso de que fueran aplicados a objetos diversos de los señalados en las concesiones, salvo que la variación se hiciera con aprobación superior (art.5). La medida más trascendental que nos interesa estaría preceptuada en el artículo 7º de la Ley al exceptuar el propio Gobierno de ceder en usufructo aquellos edificios que considerara que debían conservarse como monumentos históricos o artísticos. Con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 19 de febrero de 1836. El **Decreto de 11 de enero de 1870** aprobaría la Instrucción para el cumplimiento de la Ley anterior, disponiendo que sería el Ministerio de Hacienda el que cedería en usufructo aquellos inmuebles solicitados por alguna de las entidades autorizadas, siempre que fueran consideradas justas las razones para ello, por lo que en caso contrario, se daría cuenta al Consejo de Ministros, quien debía finalmente acordar si se cedía dicho inmueble (art.1º). En caso de que el inmueble tuviese un interés histórico y artístico, serían las Comisiones de Monumentos las que decidirían la cesión, conforme al artículo 7º de la Ley (art.9º), por lo que nuevamente el Gobierno intentaría salvaguardar dichos edificios eclesiásticos desamortizados.

#### **1.2.3.2. El proceso de secularización de la riqueza artística: La incautación de los bienes religiosos de interés histórico y artístico por el Decreto del 1 de enero de 1869.**

Durante el Gobierno Provisional del General Serrano, personalizada en la figura de Ruiz Zorrilla, se va a dar una de las medidas más relevantes en la evolución de la concepción pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico, al transformar los bienes muebles eclesiásticos de interés histórico y artístico en dominio público, lo que sería denominado por las propias disposiciones normativas como proceso de secularización de la riqueza artística, literaria y científica. Un precedente inmediato sería la **Circular del 21 de octubre de 1868** del Ministerio de Gobernación, mandando proceder a la incautación, bajo inventario y con asistencia de Notario Público, de los edificios, libros, papeles y fondos pertenecientes a la Compañía de Jesús y a los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, fundados con posterioridad al 29 de julio de 1837, y las asociaciones conocidas con el nombre de Conferencias de San Vicente de Paul. Una vez incautado se procedería a inventariar con asistencia de Notario Público, los edificios, libros, papeles y fondos que pertenecieron a dichas corporaciones extinguidas, o que se encontraran en poder de los Superiores, Presidentes y Secretarios de las mismas, o de cualquiera otra persona, poniendo a disposición del Ministro de Hacienda los edificios y caudales, a la del Fomento las Bibliotecas y objetos de arte, y a la

del de Gracia y Justicia los papeles y documentos concernientes a la fundación y régimen de aquellos institutos.

Con la promulgación del **Decreto de 1º de enero de 1869** se dispondría la incautación por el Estado, y en su nombre por el Ministerio de Fomento, de todos los Archivos, Bibliotecas, Gabinetes y demás colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura que estén a cargo de las Catedrales, Cabildos, Monasterios u Ordenes Militares, por lo que se estaba asistiendo ni más ni menos a un proceso de transformación del régimen jurídico de la propiedad de la Iglesia en el ámbito del patrimonio histórico-artístico y bibliográfico, que dejaría de ser privada para pasar a uso público, llenando los espacios expositivos de los museos y bibliotecas públicas que habían surgido desde la etapa isabelina y que en la etapa revolucionaria se intentó incrementar, proceso por cierto que continuaría en la Restauración, al mismo tiempo que se abordaría un nuevo proceso de descontextualización de los bienes, al dejar de ser considerado bienes de interés religioso para convertirlos en bienes culturales propiamente dichos, en un proceso que la propia Exposición de Motivos calificaría de secularización de la riqueza artística, literaria y científica, distinguiendo el presente proceso desamortizador de los anteriormente realizados por los gobiernos liberales, ya que éstos únicamente se habían referido a *la riqueza material de los bienes temporales que, en cantidad inmensa, poseían las corporaciones, y especialmente el clero, con grave daño del fomento y desarrollo de la vida pública (...)* pero *la brevedad del tiempo que la libertad ha influido en el Gobierno de España no ha permitido a nuestros grandes reformadores pasar más allá en la secularización de la riqueza atesorada por el clero, a lo que había que unir el estado lastimoso en que siempre han dejado al país los Gobiernos reaccionarios ha sido causa de que se atendiera principal y casi exclusivamente a los medios de atajar la miseria pública y el decaimiento de las fuerzas de la nación, trayendo al mercado la riqueza inmueble, escitando el interés particular y sacando a la plaza los capitales ocultos ante la desconfianza que precede a los grandes trastornos políticos.* Por el contrario, en la Exposición de Motivos se subrayaba que la revolución de Setiembre, *más radical, más grande, más poderosa que todas las anteriores, debía de abordara aquellas reformas que han de preparar el renacimiento intelectual de nuestra patria, por lo que para conseguir este gran objeto era preciso que a la desamortización territorial y a la libertad de enseñanza siga inmediatamente la secularización de la riqueza científica, literaria y artística, sin la cual quedarían defraudados los generosos intentos de una revolución exigida por el progreso y reclamada en nombre de los fueros de las ciencias modernas.* El mal estado de conservación en que se encontraban estos bienes en los conventos y otros edificios religiosos llevaría a esta necesidad de la *secularización de estos objetos, ya que en los antiguos y destruidos monasterios, alejados de todo centro de actividad y aun de toda población, en ciudades de escaso vecindario, en las iglesias y catedrales, existen en España riquezas materiales de enseñanza y estudio, obras de la inteligencia de todos los siglos, valores cuantiosos, representados por los libros, los códices y los instrumentos científicos; obras de destreza y de consumada*

*experiencia, representadas por la infinita variedad de objetos labrados para la necesidad de la vida humana, algunas de las cuales protestan por su uso del sitio en que se conservan estérilmente, del mismo modo que el avaro conserva su riqueza ocultándola a toda mirada y apartándola de todo útil movimiento. Allí están expuestas a todos los peligros y contingencias del aislamiento; al fuego del cielo y al robo a mano armada; a las inundaciones y a la estafa; a la destructora obra del tiempo y del abandono, tal vez más temible.* La defensa de la propiedad pública de estos bienes sería abordada como algo inusual en el tratamiento legislativo del Patrimonio Monumental ya que no solamente instaba al derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información que contuvieran *Algún espíritu apocado podría suscitar la cuestión de una propiedad, negable en la mayor parte de los casos y dudosas en muy pocas; pero, ¿Quién duda que los Archivos, los libros impresos, las vitelas, y las encuadernaciones, que pueden por si solas dar a conocer una época, no deben permanecer ocultos y en manos de ignorantes, que se distinguen por su recelo de toda ilustración y por su confianza en toda inocencia de cultura? ¿Quién duda que hay en la nación un perfecto derecho para conocer y usar de esa riqueza que está hoy escondida a toda vista humana, siendo el emblema de la avaricia atesorada, protestando contra la ilustración, y viviendo expuesta a que se abran las puertas que la guardan a la seducción del oro, en tanto que se cierran a los permisos y órdenes del Gobierno?*, sino que incluso serían considerado como bienes que al representar los valores de la identidad nacional, no podían formar parte de ninguna entidad o particular ajena a la comunidad: *Los documentos a que se refiere este derecho no son propiedad de ninguna persona ni corporación: son del pueblo, son de la Nación, son de todos, porque son glorias nacionales o monumentos en que deben estudiarse la historia patria y la verdad de los hechos pasados.* De esta manera, el Estado, y en su nombre, el Ministro de Fomento se incautaría de todos los Archivos, Bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura que con cualquier nombre estuvieran a cargo de las Catedrales, Cabildos, monasterios u Órdenes militares (art.1º), considerándose que estos bienes se convertirían en nacional, y puesta al servicio público, en cuanto se clasifique, en las Bibliotecas, Archivos y Museos Nacionales (art.2º), quedando exceptuadas las Bibliotecas de los Seminarios, que quedarían en manos de la Iglesia (art.3º).

Unos días después sería promulgada la **Orden de 18 de enero de 1869**, por la que se completaba las disposiciones que aparecían insertadas en el decreto del 1º del corriente, sobre incautación por el Estado de los objetos de ciencias, letras y artes que poseía el clero. Los bienes muebles incautados comprenderían los libros impresos o manuscritos reunidos en colecciones o bibliotecas, vitelas, documentos, láminas, sellos, monedas y medallas, y cualquier objeto artístico o arqueológico que sirva para enriquecer las Bibliotecas, Archivos, Museos o colecciones que pudieran dar a conocer la historia de las ciencias y las letras españolas en sus diversas épocas, quedando exceptuados los objetos de inmediata aplicación o frecuente uso en el culto y los que se guardaren dentro del recinto destinado al mismo(art.10). Se



establecería un procedimiento muy minucioso, siendo los Gobernadores civiles o la Autoridad superior civil en las poblaciones en que existieran iglesias, catedrales, colegiales, monasterios *quienes se personaran en nombre del Gobierno Provisional en dichos edificios*, los que iniciarán la incautación. Serán acompañado de un individuo del cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios *que oportunamente se pondrá a sus órdenes o en defecto de este de una persona notoriamente ilustrada elegida por la misma Autoridad*, invitando asimismo a todos los individuos que tuviesen alguna parte en la dirección, administración o guarda de los mismos a reunirse en el perentorio término de una hora (art.1º). Una vez reunidos, se leería el decreto de esta fecha, y en seguida se pasaría a la toma de posesión en nombre de la nación, sin que pudiera demorarse por ningún pretexto ni motivo (art.3º), recogiendo la Autoridad Superior, *todas las llaves de las puertas, armarios, cajas, arcas, mesas, &c, sin permitir que se abran más que aquellos muebles en que se conserven los inventarios, índices, registros o catálogos* (art.4º), extendiéndose un acta de toma de posesión, que sería firmada por la Autoridad civil, el comisionado por el Gobierno o por la Autoridad local, un individuo de la casa y otro del clero (art.5º), siéndole entregada los índices o catálogos y quedando el edificio custodiado por los agentes de la misma y por los empleados en él encargados ordinariamente de su guarda (art.6). La Autoridad civil, de acuerdo con el comisionado, podría confrontar en el acto los inventarios, índices o catálogos *si fuera posible y la prudencia se lo aconsejare*, que en caso de hacerlo la Autoridad eclesiástica presente firmará el resultado de la confrontación (art.7). El comisionado del Gobierno o de la Autoridad local estudiaría los índices o informará a este Ministerio, en un plazo improrrogable de ocho días, acerca de la traslación de todo o parte de lo incautado a los puntos que le parezca conveniente, por lo que redactaría un informe acompañado de un proyecto de conducción y el presupuesto de los gastos que pueda ocasionar, así como una propuesta del destino que debía darse a los armarios, estantes pertenecientes a las Bibliotecas y Archivos (art.9º). Todos los problemas que surgieran en este proceso debían de ser dejados *a la prudencia, celo y patriotismo de los Gobernadores y de los Comisionados* (art.11). La toma de posesión sería comunicada por telégrafo por los Gobernadores comunicarán al Ministerio por telégrafo (art.12).

El decreto sería remitido a los Gobernadores de la Provincia mediante la **Circular del 18 de enero de 1869**, precisando que debían *fijarse solamente (...) en los puntos que dicen relación con la localidad de su mando; pero advirtiéndole que no por ello habrá de omitir idénticas diligencias a las que la instrucción contiene, en cualquiera corporación eclesiástica que radique en su jurisdicción administrativa, y en la cual pudieren existir objetos de los que en el decreto se reclaman para el Estado, aunque dicha corporación o edificio no se mencione en la noticia sumaria*. Las medidas de incautación de bienes muebles eclesiásticos tendría su culminación en la **Orden de 5 de febrero de 1869** por el que se disponía el nombramiento de una Comisión que se encargase *con toda la urgencia posible* de

redactar un Informe general sobre la importancia, valor científico y más adecuado, útil y económico destino de las colecciones y objetos que existían en poder del clero y de que se hubiera incautado la Nación en virtud del citado decreto fecha 1º de enero (art.1), por lo que serían nombrados como miembros de la misma, atendiendo *a las necesarias dotes de ilustración notoria y probada competencia en los diversos estudios y ramos especiales a que este asunto se refiere, a Fermín Caballero, Académico de la Historia y la de Ciencias Morales y Políticas, con el carácter de Presidente; D. Cayetano Rosell, individuo de la Academia de la Historia, Director de la Escuela Diplomática y de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional; D. Lázaro Bardón, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras; D. Manuel Rico y Sinobas, Catedrático de la Facultad de Ciencias; D. Santos de Isasas y Valseca, Profesor de la Escuela Diplomática, y D. José María Escudero de la Peña, Profesor de la misma Escuela y Secretario General del Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, que ejercerá las funciones de Secretario de esta Comisión* (art.2).

La aplicación del Decreto de 1 de enero de 1869 tuvo una amplia proyección en algunas provincias como en el caso de Guadalajara, que ha sido objeto de un reciente interesante estudio monográfico que nos ayuda a constatar la vigencia de este decreto. En las incautaciones no se aprovechó el conducto ya establecido de las comisiones de monumentos, y al margen de ellas, el Ministerio de Fomento dispuso la existencia de una Comisión General de Incautación que coordinaría la confiscación de las bibliotecas de las instituciones religiosas, por parte de las autoridades locales y el gobernador civil. En la Orden del 18 de enero se establecería un procedimiento administrativo de incautación: La toma en nombre de la nación por parte del gobernador civil, o autoridades civiles en su caso, acompañados por de un individuo del cuerpo de bibliotecarios, o de una persona competente, en un acto en que estuvieran presentes los representantes de las instituciones religiosas afectadas. Una vez seleccionado los bienes incautados, se creaba un depósito, con el correspondiente envío a la administración central de un informe técnico en el que se especificaba el destino último del material recogido y los gastos que esta operación ocasionaba. Un ejemplo significativo del procedimiento sería el proceso de secularización de la Biblioteca de la Catedral de Sigüenza, que contó con la oposición del propio Cabildo. En el acto oficial de incautación, que tuvo lugar el 24 de enero de 1869, en presencia del deán y Canónigo Magistral, junto al alcalde y el comisionado por el Ministro de Fomento. Evacuados los respectivos informes a la Comisión General de Incautación que presidía Antonio García Blanco, sería redactado el siguiente informe, que puede servir de modelo a otros casos parecidos: 1º) Que debía respetarse en sus circunstancias actuales a la biblioteca de los misioneros filipinos de Pastrana, por estar destinado al uso de los novicios y maestros del mismo; 2º) Que los libros de los franciscanos de la misma población podrían trasladarse al Instituto de Segunda Enseñanza, donde se había establecido la Biblioteca Provincial, aunque debía de cumplirse lo dispuesto en la Orden de 18 de enero de 1869, es decir, el envío de un presupuesto de los gastos de

traslado y una copia del inventario y 3º) en cuanto a la Biblioteca, por último, de la Catedral de Sigüenza, por estar formada en su mayor parte de libros incunables y no contar gran número de volúmenes podría ser traslado a Madrid distribuyéndose sus libros entre la Biblioteca Nacional y Universitaria. Sin embargo, como también ocurriría en un gran número de casos, estas medidas no se terminaron de ejecutar.

El debate sobre la incautación de bienes religiosos no se hizo esperar, como lo prueba los múltiples testimonios de rechazo que se fueron produciendo por toda la geografía peninsular. Nuevamente podemos poner como ejemplo, al propio Mateos Gago, quien criticara ásperamente en sus textos las medidas gubernamentales sobre los bienes religiosos, con el envío de una Carta al Ministerio de Fomento el 2 de febrero de 1869. En su preámbulo ya hacía constar su dolor por los ataques que se habían dirigido al clero, elogiando la labor de enriquecimiento patrimonial español que había realizado a lo largo de la historia de España: *En el decreto y en la circular para su ejecución intenta V.E. incautarse sin leve excepciones, ficticias según diré luego, de toda la riqueza artística y literaria que ha reunido el clero de España en los pasados siglos a la sombra de sus altares; más en el preámbulo pretende V.E. incautar el buen nombre, la honra de ese Clero, que vale algo más que sus tesoros artísticos y literarios; mucho más que sus codiciadas alhajas.* Mateos Gago criticaría duramente el destino de muchos de los bienes embargados, mayoritariamente en los distintos mercados fraudulentos que habría en la ciudad: *En plena incautación estamos desde el mes de setiembre; ha sido precisamente el carácter más distintivo de la revolución en Sevilla (...) La iglesia de Sta. María de las Nieves, vulgo la Blanca, fue cerrada el día 2 de noviembre. Una vez han sacado de ella objetos los incautadores para llevarlos en carros al ayuntamiento (...) la mesa de piedra de la Sacristía llegó a los almacenes convertida en mesa de pino; no llegaron los velos de los altares, ni el espejo de la sacristía; tampoco llegó ninguna escultura, habiéndose llevado cuatro ángeles del retablo de la Trinidad, un crucifijo de cuartas de alto y una Sta. Rita de media vara; se perdieron igualmente en su paso a los almacenes todas las pinturas, a saber, un retrato que estaba sobre la puerta chica y dos cuadros de dos Evangelistas; por último de dos urnas llegó una, y las cinco cortinas nuevas estrenadas en la función de las Nieves en agosto último, se volvieron cuatro cortinas de diferentes colores y muy viejas<sup>2461</sup>.*

Un ejemplo significativo en el ámbito provincial sería la promulgación del **Decreto de 15 de febrero de 1869** mandando ordenar, clasificar e inventariar los libros impresos y manuscritos, documentos y objetos arqueológicos de que se ha incautado la Nación en la ciudad de Toledo. En su Exposición de Motivos se aludía la impronta que había significado la incautación de los bienes muebles de interés histórico y artístico que hasta este momento habían pertenecido a la propiedad eclesiástica, ya que un gran número se encontraba en un estado de deterioro, cuya pérdida hubiera

---

<sup>2461</sup> MATEOS GAGO, Francisco, 1869, p.176.

significado: *Al decretar la incautación por el Estado de los Archivos, Bibliotecas y objetos arqueológicos existentes en poder del clero, constaba al Gobierno, tanto que restaban aun inmensas riquezas científicas, literarias y artísticas de esta especie, cuanto que yacían en la oscuridad y el abandono, expuestas las más veces a pérdidas tan sensibles como irreparables, e inaccesibles en todo caso a la investigación y al estudio de los que pudieran en ellas encontrar datos preciosos, peregrinas noticias, hechos no averiguados, personajes injustamente olvidados, llegando con todos estos trabajos a abrir nuevos, seguros y fecundos horizontes al estudio de la historia patria en sus diversas manifestaciones. Al mismo tiempo resaltaba la importancia singular de la riqueza documental de la ciudad de Toledo, por su riqueza, importancia é índole, a lo más halagüeño que se pudo imaginar, al ser por largos siglos siendo uno de los principales asiento de las instituciones, de los poderes y de las personas que durante toda la edad media resumen la vida social, política y artística de la Nación española, por lo que la incautación de sus documentos estaba fundamentada no solo por la incalculable riqueza contenida bajo los muros toledanos, sino también el estado de desconocimiento y abandono en que por punto general se hallaba, y la imprescindible necesidad de custodiarla y organizarla más digna y seguramente, en honra de España, en beneficio de las ciencias y de las letras, en provecho de nuestros establecimientos científicos, y muy particularmente en gloria, enaltecimiento y restauración de Toledo, a quien la posesión y muestra de semejantes tesoros, cuya mayor y mejor parte deben conservarse en su recinto, puede devolver el lustre y prosperidad de que en otros tiempos gozara y es tan digna, fundamento que como podemos comprobar seguía estando en la misma línea de exaltación nacionalista que en la etapa isabelina. Con el fin de la salvaguarda de estos documentos se dispondría de un minucioso procedimiento administrativo que comenzaría en el proceso de ordenar, clasificar e inventariar los libros impresos y manuscritos, documentos y objetos arqueológicos de que se ha incautado la Nación en diversos locales de la ciudad de Toledo, conforme al decreto de este Ministerio, fecha 1º de enero último (art.1º), seguido de la formación de un plan de organización para el servicio público de los monumentos , según su índole e importancia respectivas (art.2), el nombramiento por el Ministerio personas competentes en los ramos de Bibliografía, Diplomática y Arqueología artística (art.3), dirigiéndose por el Ministerio de Fomento, de acuerdo con el de Gobernación, las oportunas excitaciones a la Diputación Provincial y Municipio de Toledo, a fin de que contribuyan a sufragar y facilitar la organización para el servicio público de la librería y archivo de aquel Cabildo, y el mejoramiento del Museo y Biblioteca de la provincia, con los ricos y numerosos elementos que ya poseen dichos establecimientos, y con los que se agreguen de los incautados en los conventos de la ciudad, de los existentes en las oficinas del Gobierno provincial, y de los que inmediatamente se remitirán por la Biblioteca Nacional y la de este Ministerio (art.5). En meses posteriores serían promulgadas algunas disposiciones complementarias como la **Orden de 6 de mayo de 1870**, por el que procediera a sellar y numerar todos los documentos que existen en los Archivos, mientras que se reorganizara el Cuerpo facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, para lo que en*

orden a no perder dicha riqueza documental, y no poder realizarlo con el ritmo que debiera a la formación de índices formales y de inventarios, se procediera a sellar y numerar todos los documentos que existieran en los Archivos, *lo cual puede hacerse brevemente, y contribuirá sin duda a asegurar su conservación hasta que sea posible estudiarlos, clasificarlos y darlos a conocer.*

El destino de la gran riqueza bibliográfica de los conventos sevillanos para la fundación de la Biblioteca Universitaria es al mismo tiempo criticado por Mateos Gago: *Incautado el Gobierno de las librerías de los conventos de Sevilla y su provincia, se fundó la Biblioteca pública existente hoy en la Universidad a cargo del Estado. Dejo aparte las circunstancias en que los libros fueron allí conducidos a carradas y depositados en montones desde el suelo al techo en los desvanes de la Universidad, sirviendo de madrigueras a las ratas desde el año de 1835 al 42. Allí debieron estar, según los catálogos de incautación, unos ciento veinte mil volúmenes; entraron solo treinta mil; y gracia al zelo de algunos particulares como los Sres. López Rubio, Cepero y Huet que se valieron para la traslación hasta de los carros de la basura, pues de otra manera el abandono completo del Estado hubiera consumido todos los libros en los puestos de pasa, turrónes y aropías. Soy testigo de vista y conmigo los numerosos operarios que invitados por el catedrático de la Universidad, difunto ya Cardenal La Puente, nos propusimos el arreglo de la Biblioteca en tres años de trabajo sin retribución del Estado. Entrando los carreros, los mandaderos y cuantos quisieron entrar en los conventos, llenaron sus casas de libros, y la ciudad estaba obstruida con los puestos en que se vendían, los libros amontonados en el suelo, desde uno a cuatro reales según tamaño. Testigos de estos hechos son también los extranjeros, porque para vergüenza, no del clero sino de nuestras revoluciones, los extranjeros, hasta los bárbaros rusos mantenían comisionados en nuestras capitales de provincia, y de cuando en cuando salían de nuestros puertos sus buques cargados con la riqueza literaria de la España antigua, malbaratada por la España moderna, regenerada e ilustrada. De los treinta mil volúmenes hacinados en la Universidad no se aprovecharon más que veinte mil, porque los diez mil resultaron incompletos; estos con los duplicados de varias agregaciones posteriores de S. Acasio y Maese Rodrigo, formaron un conjunto de mil ochocientas arrobas, que se vendieron por orden del Estado y bajo la inspección de la Comisión de Monumentos de que era entonces Presidente el Sr. Marqués de la Motilla a veinte y dos rs. arroba de libros en folio y a catorce los de menor tamaño<sup>2462</sup>. Se va a centrar también en el destino que tuvo algunos archivos concretos como el del antiguo colegio carmelita de San Alberto, del antiguo monasterio de San Isidoro del Campo y otras instituciones conventuales: *En mano de los incautadores se acabó de perder el Archivo de S. Alberto, tan celebrado en nuestras crónicas, y que ya había sufrido otro saqueo en épocas anteriores. Lo mismo sucedió con el de S. Isidro del Campo en Santiponce, de cuyos magníficos libros de coro se empleó una gran parte en hacer zambombas, y lo mismo en fin con el más curioso y rico de todos, el de nuestra célebre Cartuja. En él estaba la librería anterior a la imprenta del famoso militar cristiano Perafán de Ribera, y entre otros había manuscritos preciosos de autores que se encontraron en la conquista de Sevilla por S. Fernando, y algunos de los cuales cita en sus manuscritos**

---

<sup>2462</sup> MATEOS GAGO, Francisco, 1869, pp.164-165.



el Abad Gordillo (...). La Biblioteca de la antigua Universidad Colegio de Maese Rodrigo, permaneció incautada en su edificio muchos años; por último se ordenó su traslación en 1845, y fui uno de los comisionados al efecto. De los cinco mil volúmenes que constaban en el índice habían desaparecido unos dos mil. Era fama que el archivo de esa Biblioteca existía una colección completa de los libros de Caballería de que se hace mérito en el donoso escrutinio que el Cura y el Barbero hicieron en la librería del famoso hidalgo de la Mancha (...) puedo yo citarle Bibliotecas enteras consumidas, entre otros usos, para los cohetes con que celebraron los andaluces aquellos torrentes de sangre española vertidas en horrible y fraticida lucha (...) <sup>2463</sup>. A las objeciones que el Gobierno Revolucionario ponía sobre la conservación del patrimonio en mano de las órdenes, Francisco Mateos Gago pondría siempre en entredicho la labor administrativa ya que defendía que en incautaciones anteriores muchos de los bienes que habían formado parte de la propiedad de la Iglesia se habían perdido por haber estar situado en inmuebles poco recomendables, las frecuentes inundaciones que padecían o incluso por una mala gestión. En este sentido criticaría el estado en que se encontraba el museo de Bellas Artes hispalense ubicado en el antiguo convento de la Merced, por lo que consideraba que en realidad ese patrimonio había perdido su esplendor: *El edificio del Museo es malísimo, porque es un antiguo convento, y está aprobado que ni las escuelas, ni los cuarteles, ni los museos, ni nada más que frailes pueden albergarse cómodamente en los conventos, aunque se gaste, como sucede en el nuestro, más que si se hubiera levantado de la planta (...). Nuestro Museo, sobre tener pocas e inconvenientes luces, está manando humedad, como que su pavimento está al nivel más bajo de el Guadalquivir. El Padre Eterno de Zurbarán se deterioró manchándose de humedad, y ha sido preciso restaurarlo. En 1856 hubo un invierno terrible; las aguas se multiplicaron como las del diluvio en las calles de Sevilla, y en el edificio del Museo crecieron soberbias hasta la altura casi de una vara. El zelo de los empleados pudo evitar desastres en los cuadros de mérito, pero las aguas entraron en los almacenes en que habían muchos lienzos sin colocar, ó por falta de espacio, que también es mezquino el local, o por qué estaban de desecho (...) Pregunte V. E. a la Academia de Bellas Artes si el edificio museo tiene ni medianas condiciones para llenar su objeto, y que exponga con franqueza los esfuerzos heroicos que por mucho tiempo vienen haciendo, para poder conservar la riqueza encargada a su custodia. ¿Y qué diré de la sección del Museo correspondiente a Arqueología? En los corredores bajos de los patios de ese edificio hay un montón de piedras y restos de estatuas, tendidos todos en el suelo sin orden ni concierto, sin clasificación ni siquiera inventario (...) <sup>2464</sup>.*

#### **1.2.4. La suspensión de las ventas de bienes inmuebles eclesiásticos durante el Gobierno de Amadeo de Saboya (enero 1871-febrero 1873).**

Gracia a las gestiones de estas instituciones pudieron paralizarse las subastas públicas que se celebraron de un gran número de edificios religiosos

<sup>2463</sup> MATEOS GAGO, Francisco, 1869, p.166.

<sup>2464</sup> MATEOS GAGO, Francisco Carta al Excmo. Sr. Ministro de Fomento con motivos de su decreto sobre incautación de cosas eclesiásticas del 1º de enero de 1869, *Opúsculos*, T. I, 1869, pp.171-172.

de interés histórico-artístico, como podemos comprobar en el caso de Sevilla, en la que por **oficio de traslado del 10 de julio de 1872** enviado al Administrador Económico de la Provincia de Sevilla, se declaraba nula la venta en subasta pública de la iglesia de San Esteban de Sevilla, en el que constaba *que en vista del expediente promovido por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de esa provincia, contra la subasta anunciada para el día 4 de octubre de 1871, con el número 2383 de inventario, del edificio ex iglesia de San Esteban; en quiebra de Don Ramón Piñol que la remató en 29 de noviembre de 1870, y estimando digna de ser atendida las razones en que se funda dicha Comisión puesto que se trata de un templo monumental que puede considerarse como uno de los ejemplares mas raro, completo y característico de un periodo brillante del arte y de una manifestación del mismo que bien puede llamarse exclusiva del territorio español, constituyendo por lo tanto uno de sus titulos mas legítimos, de gloria, cual es el arte mudéjar, la Junta Superior de Ventas, conformándose con lo propuesto por esta Dirección General, ha acordado en sesión 4 del corriente declarar la nulidad de las dos citadas subastas.* Gracias a las gestiones realizadas por la Real Academia de la Historia pudo ser salvado de venderse en subasta pública el Monasterio de San Isidoro del Campo a raíz de la **Real Orden del día 6 de abril de 1872**, pasando a depender en lo sucesivo del Ministerio de Fomento, al ser declarado Monumento Histórico, que le eximía de venta en pública subasta. Unos días después, el 11 de abril de 1872, Demetrio de los Ríos enviaría un Oficio solicitando que fuera expedido un decreto circular a todas las Comisiones de Ventas de Bienes Nacionales para que no saquen a subasta pública ningún edificio religioso o civil que sea monumental o histórico.

#### **1.2.5. Las medidas proteccionistas de los bienes inmuebles eclesiásticos de interés histórico y artístico de la I República.**

##### **1.2.5.1. La restauración de los edificios religiosos en manos del Estado: La ley de 9 de mayo de 1873.**

Los tintes secularizadores inspiradores de la República impregnaron al mismo tiempo la política tutelar en el campo de la Restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico, que llevaría a un cambio administrativo fundamental, poniendo fin a la confusa injerencia eclesiástica en la gestión de las obras de restauración, por lo que fueron publicadas una serie de disposiciones administrativas en orden a impulsar un verdadero control del Estado sobre cualquier obra que afectara al inmuebles eclesiástico digno de protegerse. De esta manera el Gobierno Provisional y la monarquía democrática, pese a sus tendencias fuertemente secularizadoras, no dieron el paso definitivo de declarar las obras de restauración de carácter civil y bajo la total administración del Estado. Esta decisión sería adoptada ya por la República en **la ley de 9 de mayo de 1873**, por el que los expedientes de obras de restauración se traspasarían del Ministerio de Gracia y Justicia al de Fomento, en su Sección de Construcciones Civiles, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, lo que significaba que todas las obras quedaban bajo la administración del Estado. Con este cambio administrativo se

daría a las obras el carácter de construcción civil, y como tales, se someterían a la fórmula general administrativa que para las restauraciones ordinarias dictó el Ministerio de Fomento el 24 de mayo de 1873, por lo que se disolvería la Junta Diocesana, creándose en su lugar la Junta Inspectora que estaría presidida por el Gobernador Civil, la máxima autoridad en la ciudad, anulando toda intervención del Cabildo Catedralicio en las obras. Parecía que se iba a culminar la separación Iglesia-Estado, como se había establecido en el artículo 35 del proyecto de la nueva Constitución<sup>2465</sup>. Un paso más hacia la secularización de los trabajos de restauración de las obras eclesiásticas lo representaría el proyecto de Ley presentado por Pedro Moreno Rodríguez, Ministro de Gracia y Justicia, el **primero de agosto de 1873**, en el que el Estado limitaba claramente la propiedad de la Iglesia sobre aquellos inmuebles religiosos que hubiesen sido declarados Monumentos. El Estado reconocía el derecho de la Iglesia a conducir sus asuntos con plena independencia y a ser dueña de sus propiedades, sujetas a las leyes de la Nación, por lo que todos los templos podrían seguir desempeñando su función espiritual, al mismo tiempo que aquellos que fueran declarados Monumentos Nacionales tendrían que estar supervisados por el Gobierno. Esta medida supondría establecer claramente la limitación de propiedad que entrañaba la declaración de Monumentos de los edificios religiosos. La oposición por parte de la propia Iglesia no se haría esperar, como lo prueba que en 1875 cuando Saturnino Fernández de Castro, nuevo Obispo de León, inició gestiones ante el Ministro de Fomento Martín Herrera con el propósito de incluir una representación del Cabildo en la Junta Inspectora de las obras de Restauración, no lo conseguiría<sup>2466</sup>.

#### **1.2.5.2. La tutela del Gobierno Republicano sobre las Corporaciones Municipales en el ámbito de la conservación del Patrimonio Monumental Eclesiástico: El Decreto del 16 de diciembre de 1873.**

Durante La I República la destrucción patrimonial siguió siendo un hecho en la vida cotidiana, especialmente protagonizado por Ayuntamientos y Diputaciones Serían la Academia de San Fernando y la de la Historia y las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos las que intentaron poner freno a la barbarie que se estaba acometiendo en los años revolucionarios. La declaración de ruina de muchos conventos permitió el derribo indiscriminado por parte de los Ayuntamientos, como ocurrió en la diócesis de Málaga en el que la Corporación Municipal procedió a derribar el convento del Angel, aludiendo en que se encontraba en estado de ruina. De esta manera el 6 de abril de 1873 sería enviado un oficio al Obispado comunicándole que algunos conventos de la diócesis iban a ser reconocido por técnicos municipales. El 12 de abril de 1873, los Arquitectos de las Reales

<sup>2465</sup> GONZALEZ-VARA IBAÑEZ, Ignacio, 1996, p.105,

<sup>2466</sup> GONZALEZ-VARA IBAÑEZ, Ignacio *La Catedral de León. Historia y Restauración (1859-1901)*, Fundación Monteleón, Caja España, Universidad de León, Estella, 1993, p.263; GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, Ignacio, 1996, pp.105-106.

Academias de San Fernando, Don Cirilo Salinas, D. Gerónimo Cuervo González y D. Manuel Rivera, presentaban el Certificado sobre el reconocimiento de los edificios conventuales aludidos, encargado por el Obispado de Málaga en respuesta a la autoridad municipal, resaltando el buen estado de solidez en que se encontraba el Convento de las Carmelitas, tanto en la parte de su iglesia, como en el interior del convento y diferentes dependencias en él, está en un estado bueno de solidez y conservación y el Convento de las Capuchinas, que se encontraba en las mismas condiciones que el anterior, *y aún si cabe mejores, puesto que es de construcción más moderna y ha sufrido recientes modificaciones que le han beneficiado notablemente*. La respuesta del Ayuntamiento malagueño fue inmediata ya los inmuebles conventuales serían reconocido a su vez por el arquitecto municipal, por lo que su dictamen sería enviado al Arzobispado mediante un **Oficio del 12 de mayo**, por lo que rectificaba el dictamen de los arquitectos de la Academia de San Fernando, subrayando el mal estado en que se encontraba el convento nombrado del Angel. La reacción del Arzobispado fue inmediata, ya que al día siguiente, el 13 de mayo de 1873 enviaría un Oficio al Ayuntamiento para impedir la demolición del convento del Angel, subrayando el hecho de que el inmueble no se encontraba en mal estado, tal como así aparecía en los informes de algunos arquitectos de la ciudad, recordando la legislación vigente en torno a los derribos de inmuebles, citando concretamente las leyes 1º y 2º libro 7º tít.32, y 7º tít.19 lib. 3º y 4º., de la Novísima Recopilación, la ley del 29 de junio de 1864 y reglamento para su ejecución de 25 de abril de 1867, el decreto de Gobierno Provisional de 14 de noviembre de 1868, ni la orden expedida con consulta del Consejo de Estado 16 de febrero del 69, en consecuencia con lo ordenado en la Ley de 17 de julio de 1836 y Reglamento de 27 de julio del 53, y aludiendo a la propiedad eclesiástica del propio inmueble, *porque V.S. y la respetable corporación que tan dignamente preside, saben respetar y hacer respetar los derechos de todos, no ignorando que el citado edificio es de la propiedad de la Iglesia, y en su representación del Prelado, según toda la legislación vigente*. A pesar de ello el **Ayuntamiento de Málaga enviaría un nuevo Oficio al Arzobispado el 30 de junio de 1873** por el que se disponía el derribo de todos los conventos de la capital malagueña.

Ante la injustificada destrucción del Patrimonio Monumental Eclesiástico, los académicos de Bellas Artes, Federico de Madrazo y Eugenio de la Cámara, dirigieron el 10 de diciembre de 1873 al Ministro de Gobernación, la *Exposición que ha elevado al Gobierno de la República la Academia de Bellas Artes de San Fernando (ante de las Nobles Artes de San Fernando) para que se pongan justos límites a la facultad de ordenar y llevar a cabo la demolición de edificios monumentales, así religiosos como civiles y militares*, constituyendo sin duda un buen referente de la importante intervención que tuvieron las instituciones a la hora de salvaguardar el patrimonio: *Excmo. Señor. Todos los días se ve este Cuerpo académico en la sensible necesidad de dirigir*

*peticiones y súplicas a los diferentes Ministros y a todos los altos centros administrativos, no menos que a las Diputaciones provinciales y Corporaciones municipales para paralizar o neutralizar hasta donde alcanzan las pobres fuerzas de su persuasión, los tristes efectos de ese funesto afán de destruir, que parece haberse apoderado de todos los ánimos, que ha echado ya por tierra riquísimos monumentos de arte en crecido número, y que parece amenazar la existencia de todos los que quedan. Muchas y muy sentidas y muy razonadas han sido las exposiciones que con frecuente repetición ha elevado al Gobierno de algunos años a esta parte, y pocos y exigüos relativamente los resultados que ha obtenido, pues el furor de demoler, estimulado por la perspectiva de una vergonzosa ganancia (vergonzosa, puesto que se obtiene atacando la honra y la gloria artística del país), y sostenido por la ignorancia y la falta de sentimiento artístico de muchas Municipalidades, se sobrepone siempre al buen consejo y al buen sentido (...) La pasión política extraviada, y la intolerancia religiosa, entran por mucho con harta frecuencia en tales decisiones (...) Hartas ruinas ya en España, demasiada larga y vergonzosa es ya la serie de monumentos arrasados por la ignorancia; tiempo es de que descanse la piqueta destructora y dejemos de hacer, a los ojos que nos miran para censurarnos, el triste papel de un pueblo degenerado, que reniega de un pasado glorioso, y destruye por sus propias manos todo lo que más podía enaltecerle (...).*

Ante la petición de la Academia, el Gobierno de Emilio Castelar y de su Ministro de Fomento, Joaquín Gil Beres, reaccionaría rápidamente, redactando **el 16 de diciembre de 1873** un importante Decreto para la conservación del patrimonio. Isabel Ordieres considera que su preámbulo constituye *uno de los manifiestos ideológicos sobre el tema más clarividentes y emocionantes de todo el siglo XIX, puesto que por primera vez una ideología izquierdista desvinculaba la idea de Monumento de cualquier matiz político sectario, a favor del concepto de Bien Nacional*<sup>2467</sup>. La concepción del monumento histórico-artístico había cambiado radicalmente ya que se anticipaba por primera vez la concepción del bien que había que defender por sus valores culturales, despojados de sus valores estéticos e ideológicos, al mismo tiempo que clamaba una voz de alarma de la intensa destrucción patrimonial que se había producido a lo largo de toda la geografía peninsular en pro de una modernidad, que en realidad escondía otros intereses ideológicos y económicos: *El Gobierno de la República ha visto con escándalo en estos últimos tiempos los numerosos derribos de monumentos artísticos notabilísimos, dignos de respeto, no sólo por su belleza intrínseca, sino también por los gloriosos recuerdos históricos que encierran. Un ciego espíritu de devastación parece haberse apoderado de algunas autoridades populares que, movidas por un mal entendido celo e impulsadas por un inexplicable fanatismo político, no vacilan en sembrar de ruinas el suelo de la patria, con mengua de la honra nacional. Précianse todos los pueblos civilizados de conservar con religioso respeto los monumentos que atestiguan las glorias de su pasado y pregonan la inspiración de sus preclaros hijos: prescinden al hacerlo de la significación que el monumento tuvo; y atentos únicamente a su belleza no reparan si es obra de la tiranía o engendro de la superstición; y no es bien que nosotros, ricos en glorias artísticas y en veneradas*

<sup>2467</sup> ORDIERES, Isabel, 1995, p.33.



*tradiciones como pocos pueblos europeos, veamos con indiferencia la destrucción de todo cuanto recuerda nuestra pasada grandeza, de todo cuanto acredita el antiguo esplendor de nuestra raza. Y sería doblemente doloroso que tales atentados se cometieran en pleno régimen republicano. La República no puede ser la destrucción; la República no puede representar el vandalismo. La República, que mira el porvenir, sin renegar en absoluto del pasado; que ha de enlazar en armónica fórmula la tradición con el progreso; que ha de conceder protección decidida a todas las grandes manifestaciones de la actividad humana, no puede consentir esos excesos que la deshonrarían; no puede hacerse cómplice de esos actos vandálicos que, o revelan supina ignorancia en sus autores, o son el triste fruto de una fatal tendencia, tan criminal como insensata, que aspira a levantar el edificio del progreso sobre las ruinas de la sociedad entera (...).*

En el articulado se establecerían un nuevo marco administrativo más centralizado, al darle más potestad a los gobernadores civiles que a los propios ayuntamientos, con el objetivo de frenar la demolición de todo tipo de bienes inmuebles: *Siempre que por la iniciativa de los Ayuntamientos o Diputaciones provinciales se intente proceder a la destrucción de un edificio público que por su mérito artístico o por su valor histórico deba considerarse como monumento digno de ser conservado, los gobernadores de provincia suspenderán inmediatamente la ejecución del derribo, dando parte a esta superioridad. La facultad de los gobernadores, que hasta este momento había tenido un papel predominante en la política tutelar del Patrimonio Monumental, quedaría delegada en caso de que no cumplieran esta disposición con la prontitud debida, por lo que las Comisiones de Monumentos, las Academias de Bellas Artes, los rectores de las Universidades y los directores de institutos estarán facultados para comunicar a esta superioridad la noticia del proyectado derribo (art.1), que lo volvería a reiterar en el artículo 4º: Los gobernadores de provincias, las Comisiones de Monumentos, las Academias de Bellas Artes de provincia, los rectores de las Universidades y los directores de los Institutos quedan encargados bajo la más estrecha responsabilidad del cumplimiento de las prescripciones de este decreto. Al mismo tiempo se daría una amplia potestad a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ya que una vez informado del mérito del monumento amenazado; y en caso de resultar del informe que es merecedor de conservación, se anulará la orden de derribo acordada por el Ayuntamiento o Diputación Provincial (art.2). En caso de que fuera derribado los monumentos y pudieran ser derribados, se realizarían a expensas de la Corporación que ordenó su destrucción (art.3)*

Probablemente en la legislación española contemporánea se le estaba dando una potestad ejecutiva a las Academias y a las Comisiones de Monumentos. Unos días después, el 30 de diciembre de 1873, la Academia de Bellas Artes enviaría una Circular a los Vicepresidentes de las Comisiones: *El Decreto expedido por el Ministerio de Fomento con fecha 16 del mes que termina y publicado en la Gaceta del mismo, al paso que reconoce de un modo explícito, y muy satisfactorio para esta Academia, un derecho importante que está en la índole misma de la institución, y que nosotros nunca hemos abandonado ni puesto en duda, impone*

*a las Comisiones Provinciales un deber sagrado, y hace un implícito llamamiento a su celo y patriotismo (...) muy cuerdas y mesuradas son las frases con que el Señor Ministro recomienda a las Comisiones Provinciales, Academias y otras corporaciones y personas, la vigilancia que tanto se necesita, para salvar la riqueza monumental de España constantemente amenazada; pero la Academia, que conoce por desgracia la fría indiferencia, y el abandono e inercia que manifiestan la mayoría de las Comisiones, tiene que ser más explícita en sus términos (...)*<sup>2468</sup>. El Ministerio de Gobernación enviaría una Circular el 7 de febrero de 1874, anunciando la intención de presentar a las Cortes un proyecto de Ley sobre conservación de monumentos: *La solicitud de esa Academia para que se promulgue una ley que asegure la permanencia y conservación de los monumentos nacionales, representa una necesidad comúnmente sentida, y una condición de desarrollo de los pueblos, que el Gobierno debe de garantizar, aun a costa de la iniciativa municipal, susceptible de iguales limitaciones que el derecho privado en beneficio de la colectividad. El cambio en el régimen de los Ayuntamientos y Diputaciones, la constante reforma de las leyes, no siempre conocida y aplicada, y la independencia, fuente de progreso en todo los órdenes, pero ocasionadora de abusos cuando se alteran frecuentemente las relaciones políticas, fueron causas de los hechos, fundamento de la petición de la Academia, que la justicia exige y la utilidad aconseja. Así lo comprendió el Gobierno al publicar el Decreto de 16 de Diciembre anterior, y sus motivos y su texto acreditan plenamente la necesidad y su remedio, la limitación y su causa, el afán, siempre creciente, de conservar los monumentos que representan nuestras costumbres y carácter, el modo de ser y de existir de nuestro pueblo en las distintas épocas de su historia*<sup>2469</sup>. A pesar de la intención del Gobierno de promulgar la Ley, se quedaría en un simple proyecto, ya que el 3 de enero de 1874, el general Pavía daría un golpe de Estado, acabándose con ello el periodo republicano. Un gran número de conventos habían sido convertidos en cuarteles, pero su mal estado en que se encontraba llevaría a ser promulgado el Real Decreto de 27 de septiembre de 1872 autorizando al Ministro de Guerra para que presentase a las Cortes un proyecto de ley relativo a la concesión de un crédito de 20 millones de pesetas con destino a mejorar el material de Artillería e Ingenieros<sup>2470</sup>.

### **1.3. La transformación jurídica del Patrimonio Real Monumental en bien de dominio público durante el Sexenio Revolucionario.**

<sup>2468</sup> El texto aparece publicado en Cámara, 1874 y reproducido en ORDIERES, 1995, p.78.

<sup>2469</sup> El texto aparece publicado en ORDIERES DIEZ, Isabel, 1995, p.264.

<sup>2470</sup> Colección Legislativa, Segundo semestre de 1872, Tomo CI, pp.532-533. Se incluye en el Real Decreto la Relación de fincas del Estado afectas al Servicio de Guerra donde se da una amplia información de los antiguos conventos y hospitales convertidos en uso militar, así como su estado de conservación (Colección Legislativa, Segundo semestre de 1872, Tomo CI, pp.546-561).

La transformación jurídica del Patrimonio Real Monumental en bien de dominio público durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874).	Perfiles políticos-institucionales del régimen patrimonial de la Monarquía Constitucional	Política institucional de la protección del Patrimonio Monumental Monárquico.
Gobierno Provisional del General Serrano (1868-1871).	Transformación del régimen jurídico del Patrimonio Monárquico	La desvinculación del Patrimonio Monumental Monárquico del dominio privado de la Corona y su función como uso y servicio de la Corona en la etapa del Gobierno Provisional: La ley de 9 de diciembre de 1869.
Gobierno de Amadeo de Saboya (enero 1871-febrero 1873)		Real decreto de 22 de marzo de 1872 sería incorporando al Museo del Prado, el de Pintura y Escultura de la Trinidad
I República (febrero 1873-enero 1874).		

### 1.3.1. La desvinculación del Patrimonio Monumental Monárquico del dominio privado de la Corona y su función como uso y servicio de la Corona en la etapa del Gobierno Provisional: La ley de 9 de diciembre de 1869.

Con la revolución del 29 de septiembre de 1868 se alteraría el estado legal del Patrimonio de la Corona. Una de las primeras medidas que afectarían al Patrimonio de la Corona sería el nombramiento de un Consejo en virtud del **Decreto del 14 de octubre de 1868**, para la conservación, custodia y administración de estos bienes. En la Exposición de Motivos se hacía hincapié del papel jugado por las Junta Revolucionaria de Madrid: *La Junta revolucionaria de Madrid, que con incansable celo y con la mayor prudencia ha sabido proteger todos los intereses y resolver todas las cuestiones provocadas por el nuevo orden de cosas, se había apresurado, en nombre de la nación, a incautarse de los bienes que pertenecieron al patrimonio de la Corona de España, y a su previsión se debe, después que la sensatez incomparable del honrado pueblo de Madrid, la conservación de tan considerables riquezas. Las gestiones practicadas por la mencionada Junta después de aquello momento, han sido todo lo acertadas que de su*

*ilustración y patriotismo debía esperarse, y las artes lo mismo que el Estado, le son deudores de un servicio tanto más importante, cuanto que entre los bienes del mencionado patrimonio figuran propiedades de gran valor y objetos de sumo mérito artístico. Sin embargo, y debido al especial carácter que tenía estos bienes hacía imprescindible crear una institución para su mejor conservación: Esta misma importancia de los bienes incautados, su especial carácter, y la circunstancia de hallarse esparcidos por diferentes provincias de España, exigían para su administración y custodia los cuidados de una corporación más desembarazada de atenciones que la Junta Revolucionaria de Madrid, y con autoridad bastante para llevar sus órdenes a cualquier punto de la Península donde se creyeran necesarios (...) solo pueden confiarse a una comisión especialísima, presidida por un individuo del Gobierno provisional, a fin de que sus decisiones tengan toda la autoridad necesaria, y compuesta de personas cuyo patriotismo sea perfecta garantía de acierto. El Consejo constaría de diez individuos, nombrados por la Presidencia del Gobierno provisional, se encargará de la conservación, custodia y administración de los bienes que constituyeron el patrimonio de la Corona de España (art.1º), fijando la plantilla y nombrará los empleados estrictamente necesarios para este servicio (art.2º), siendo el Ministro de Hacienda quien presidiría el Consejo, disponiendo que las medidas que este califique de importancia suma serán sometidas para su ejecución a la aprobación del Gobierno Provisional (art.3º), y el Secretario General será el Jefe Administrativo encargado de ejecutar los acuerdos y su cargo el único retribuido (art.4º). Como puntualiza López Rodó, este decreto no tenía otro carácter sino el de una medida de urgencia para encomendar a algún organismo unos bienes que, con la desaparición momentánea de la Casa Real, habían quedado sin administrador; y sin perjuicio de que más adelante se diera una ley que señalara el destino de dichos bienes, puesto que desde un principio se pensó que la existencia del Patrimonio de la Corona no se avenía muy bien con las ideas revolucionarias.*

La inseguridad de la conservación de los bienes del Patrimonio de la Corona dio lugar a la promulgación de la **Circular del 17 de octubre de 1868** excitando el celo de los gobernadores de provincia para la conservación de los bienes que constituían el patrimonio de la Corona y descubrimiento de los que pudieran hallarse detentados por efecto de su viciosa administración. Se informaba a las autoridades locales sobre la incautación de los bienes que habían formado parte de la Corona de España, y el nombramiento para su tutela de un Consejo para su conservación, custodia y administración, que a su vez necesitaba para *llenar bien su cometido, el auxilio de cuantos están interesados en que gran parte de las propiedades mencionadas sirva para hacer frente a los apuros del Tesoro, aumentando los recursos de la desamortización.* Se subrayaba la importancia de conservar estos bienes calificándolo de interés nacional, e incluso de incrementar el beneficio que podría proporcionar. Una de las incautaciones digna de mención por su valor artístico fue el que dispuso el 3 de noviembre de 1868 el Gobierno Provisional entregando al Ministro de Fomento la Florida, donde se instalaría la Escuela de Agricultura. En virtud del **Decreto**

**de 6 de noviembre de 1868** el Gobierno Revolucionario cedería al ayuntamiento de Madrid el Sitio del Buen Retiro, para que pudiera ser utilizado como parque público. En la Exposición de Motivos se resaltaba la importancia que tenía para el desarrollo de una ciudad la creación de un parque público, y la transformación jurídica que significaba pasar de ser un bien de dominio real a dominio público: *Madrid, como todas las grandes capitales, y con más motivo que la mayor parte de éstas, por la gran densidad de su población, necesita parques donde pueda el vecindario esparcirse y respirar el aire libre, y por esto, sin duda, viene de antiguo disfrutando gran parte del llamado Sitio del Buen Retiro. Pero reducida esta concesión por parte de sus antiguos poseedores a lo menos que pudiera permitirse a una población tan falta de esta clase de mejoras, el vecindario de Madrid echa muy de menos los Parques abiertos en otras capitales de Europa (...). El Sitio del Buen Retiro, que tiene favorables condiciones para convertirse en un verdadero parque, con todos los elementos necesarios para que llegue a producir las mismas ventajas de instrucción e higiene que están produciendo en el extranjero esta clase de mejoras, solo podrá ofrecer tan útiles resultados, convirtiendo el limitado permiso que respecto a él se había concedido al vecindario de Madrid en un derecho a su disfrute.* En el articulado ya se establecía las condiciones que el Gobierno Provisional establecía de la cesión del parque al Ayuntamiento, por lo que debía respetar sus límites actuales y destinarlos exclusivamente a recreo del vecindario de esta capital (art.1º) y al mismo tiempo el Ayuntamiento de Madrid no podrá dedicar ninguna parte de la superficie del expresado Parque a construcción de barrios, manzanas o casas aisladas, sino dando cuenta al Gobierno Provisional. Queda facultado, sin embargo, para llevar a cabo todas aquellas construcciones para recreo o instrucción que se hallen en armonía con el objeto del nuevo Parque, tales como salones de conciertos, bibliotecas, jardines de aclimatación u otros análogos, destinando sus productos a la conservación y mejora del mismo (art.2º). El 18 de diciembre de 1868 sería creada una Dirección General del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Con la promulgación de la **Ley de 18 de diciembre de 1869** quedaban extinguidos los bienes que habían formado parte de la Corona. En el artículo 1º se declaraba extinguido el Patrimonio de la Corona, fundado por la ley de 12 de mayo de 1865, al mismo tiempo la identidad de dominio público de los mismos: *Los bienes y derechos comprendidos bajo la anterior denominación y la de la Real Casa, revierten en pleno dominio al Estado.* Surge por consiguiente una nueva situación jurídica del Patrimonio de la Corona, precisado por López Rodo en los siguientes términos: Con la ley de 1869 el Patrimonio de la Corona se ha extinguido; la Corona no tiene Patrimonio alguno; es la desaparición del último vestigio de la idea patrimonial de la monarquía. Aunque la mayor parte de los bienes subsisten y conservan incluso su antiguo destino, el título de adscripción a la Corona es totalmente distinto: no le son entregados como bienes propios, integrantes de su Patrimonio, sino en usufructo, para su uso y disfrute. Los bienes son ahora del Estado, que se los ha apropiado. En la práctica el cambio de situación jurídica no tiene gran



trascendencia, puesto que las facultades de la Corona para su administración y gobierno son sustancialmente las mismas. En el título I de la ley se establecía asimismo la enajenación de dichos bienes, por parte del Estado incluyendo los correspondientes a los Particulares de la Casa Real exceptuándose solamente los que se destinasen a uso y servicio del Rey (art.2.1), los que posean valor histórico y artístico (art.2.2), los que convengan a destinar al servicio del Estado (art.2.3) y los que se cedan para servidumbres públicas y usos comunes de los pueblos (art.2.4). En el título segundo se haría una enumeración detallada de los bienes exceptuados de la regla general de enajenación y que se destinan al uso y servicio del Rey. Entre los bienes estaría el Palacio Real de Madrid, la Casa de Campo, el sitio del Pardo, el de Aranjuez, el de San Lorenzo, el de San Idelfonso, el Alcázar de Sevilla y el Palacio Real de Mallorca, con el Castillo de Bellver. Cotejando la lista de bienes que aparece incluido en la ley de 1869 con la de 1865, se había reducido su número, como los reales sitios del Buen Retiro, que en la ley anterior había segregado una parte destinada a vía pública y a construcciones, La Florida, algunas parcelas de Aranjuez, El Escorial y La Granja, y la Alhambra. López Rodo subraya que las disposiciones de esta ley son más revolucionarias en su forma que en su contenido, puesto que si en los principios teóricos presentan diferencias notables respecto a la ley anterior, en la práctica viene a dotar a la Corona, o mejor dicho, a poner a su servicio, un conjunto de bienes que son sustancialmente los mismos que antes disfrutaba. La medida se completaría con la **Orden de 17 de junio de 1871** por el que disponía que fuera entregada a la Dirección General del Real Patrimonio los bienes e inmuebles destinados según la ley al uso y servicio del Rey, con arreglo a la ley de 19 de diciembre de 1869.

### **1.3.2. Las disposiciones legales del Gobierno de la I República sobre el destino de los bienes del Patrimonio de la Corona.**

#### **1.3.2.1. Los decretos de 15 de abril y 25 de junio de 1873 sobre el destino de los Archivos pertenecientes a la Corona.**

Durante la I República se fueron promulgando una serie de disposiciones normativas sobre el destino de los Archivos de la Corona en Cataluña y Baleares, como el **Decreto de 15 de abril de 1873** que disponía que los Archivos de los bienes de las Bailías del Patrimonio que habían pertenecido a la Corona en Cataluña y Baleares pasasen a formar parte de las Bibliotecas Provinciales, Archivos Generales y Administraciones económicas de Barcelona y Baleares, por virtud de la ley de 18 de diciembre de 1869, *donde se custodian documentos de no escaso valor, ya bajo el punto de vista científico, ya bajo el literario, apuntando la conveniencia que se difunda el conocimiento de los datos que ellos contengan*, por lo que urgía su traslación a establecimientos donde puedan consultarse fácilmente, haciéndose útiles para la historia y ciencias patrias, y evitándose por otro lado el riesgo que corren de perderse. Los documentos que pasarían a los Archivos eran 1º. Libros impresos y códigos puramente

literarios; 2º. Papeles, códices y manuscritos de carácter histórico y 3º. Documentos de interés privado que puedan servir de título para fundar derechos civiles, subdividiéndose en dos épocas: primera, hasta 1750 inclusive; segunda, desde 1751 hasta la actualidad. Los documentos pertenecientes al primer término pasarían a formar parte de las Bibliotecas provinciales respectivas y los del segundo se incorporarán a los Archivos históricos de Barcelona y Palma de Mallorca; así como los de la primera época del tercer grupo pasarán a los Archivos de las respectivas administraciones económicas (art.2º). La clasificación y distribución de estos documentos lo haría el delegado o delegados del Cuerpo especial facultativo de Archiveros y Bibliotecarios que el Ministro de Fomento, de acuerdo con el de Hacienda, designe en cada localidad, en unión del Jefe de la Administración económica de la provincia (art.3). Unos meses después sería promulgada la **Ley de 25 de junio de 1873** por lo que se agregaría definitivamente a la Biblioteca y Archivos de las Cortes el Archivo y Biblioteca del Palacio que en Madrid ocupaban los Reyes de España, con todos los objetos de arte y mobiliario, las cuales debían continuar en el mismo edificio, *ocupando los locales que fuesen precisos hasta que las Cortes habiliten otros que reúnan las condiciones necesarias* (art.1).

**1.3.2.2. La incautación de los bienes que habían pertenecido a la Corona: Ley del 24 de 1873, disponiendo que el Ministro de Hacienda se incaute de todos los bienes que pertenecieron a la Corona.**

En el artículo 1º de la **Ley de 24 de 1873** se dispondría que el Ministro de Hacienda se incautará de todos los bienes que pertenecieron al Patrimonio de la Corona, y continuará administrándolos ínterin la Comisión nombrada por las Cortes para encargarse de dichos bienes, emite dictamen acerca de la clasificación y destino definitivo que debe darse á los mismos.

**1.3.3. La protección pública de la Alhambra como bien de interés histórico-artístico en el proceso de desvinculación y venta de los bienes que constituía el Patrimonio Monumental de la Corona a raíz de la ley de 9 de diciembre de 1869.**

A raíz de la publicación de la ley de 9 de diciembre de 1869 una serie de bienes inmuebles que habían pertenecido a la Corona quedarían desvinculados, por lo que podían ser puesto en venta sin ninguno tipo de obstáculo, por lo que algunos de los inmuebles que tenían un interés histórico y artístico quedaron en peligro de conservación, como fue el caso de la Alhambra, que hasta este momento había pertenecido al Patrimonio real y quedaba en peligro de ser adquirido por los particulares. Las consecuencias negativas que pudo tener para la conservación del edificio llevarían a una amplia movilización institucional, especialmente gracias a las gestiones de Rafael Contreras, que conseguiría evitar la disgregación del conjunto palatino nazarí. La intervención de la Comisión de Monumentos de Granada enviando una Memoria al Gobierno a las Comisiones Provinciales y a la Comisión

Central, recogido en el **Impreso del 9 de diciembre de 1869** en el que se pone de manifiesto la postura de la Comisión de Monumentos de Granada sobre la ley que dispone que la Alhambra pase a ser propiedad del Estado, defendiéndose la conservación íntegra del edificio y su entorno, una parte ocupada por parcelas privadas dio lugar a que fuera declarado Monumento Nacional el 12 de julio de 1870, obteniendo incluso su custodia, siendo nombrado el propio Rafael Contreras, Director y Conservador de la Alhambra. Finalmente el diputado a Cortes, Ricardo Chacón presentaría 7 de junio de 1872 una **Proposición de ley de Chacón** declarando exceptuado de la desamortización la Alhambra de Granada y la huerta del laurel de la Zubia. En ella recalca la importancia de conservar aquellos bienes que por interés histórico y artístico habían quedado desvinculadas de la Corona a raíz de la ley de 18 de diciembre de 1866, por lo que debía de estar exentas de cualquier venta: *La ley sobre desvinculación y venta de los bienes que constituían el Patrimonio de la Corona, exceptúa de la enajenación que dispone respecto de lo que incorpora al Estado, los que por su carácter histórico ó artístico ha de conservar la Nación.* Daría una prioridad en la conservación a la Alhambra, por ser un monumento que recuerda la historia de un pueblo que tanto contribuyó a la civilización en nuestra Patria, y las glorias de la conquista que devolvió su integridad a ésta, y que bajo el punto de vista artístico constituye una verdadera joya, única en su género en el mundo. Estimaba que a pesar de que el Gobierno había tenido la intención de que fuera protegido todavía no se había dictado ninguna ley al respecto: *Esa fue la mente del Gobierno al someter a las Cortes la expresada ley, y de la comisión nombrada para dar dictamen sobre la misma, como explícitamente declararon aquel y ésta contestando a la pregunta que el que suscribe hizo sobre el particular en la discusión de este dictamen. En ella se reconoció que el Estado debía conservar la Alhambra por su mérito artístico y por sus recuerdos históricos, y contribuir en la medida que fuera necesario a los gastos ordinarios de su conservación ocasiona, y a los extraordinarios de las reparaciones que es preciso hacer para evitar que se arruine y desaparezca. No se ha dictado, sin embargo, ninguna disposición legal que consigne que se halla comprendida en la excepción que aquella ley establece, y el año último apareció en el Boletín de Venta de Bienes Nacionales el anuncio de la de varios terrenos y algunas construcciones de la Alhambra, que solo en virtud de las gestiones practicadas al efecto pudo impedirse, obteniéndose que se diera orden de suspender el remate.*

Se insistía en la necesidad no solamente de que fuera designado una partida presupuestaria que pudiera ayudar a su conservación, como ya ocurrido anteriormente: *Lo único que se ha verificado ha sido hacer entrega por el Ministerio de Hacienda al de Fomento de parte de los bienes que constituyen la Alhambra, e incluir en el presupuesto del año siguiente al en que se hizo la indicada ley, una cantidad para los gastos de aquella, lo cual distaba de satisfacer las exigencias en este punto, así porque, no obstante lo primero, podría intentarse en lo sucesivo la venta, como a pesar de lo segundo se trató de llevar a efecto la enajenación expresada. Más aún; siendo poco después de aquel tiempo Ministro el Sr. Madrazo, se dio un decreto introduciendo economías en el presupuesto del Ministerio de Fomento; y una de ellas,*

*por inverosímil que parezca, fue suprimir la partida consignada para la conservación de la Alhambra. Así el personal como el material quedaron completamente desatendidos, y tan solo por ordenes especiales, y a fuerza de gestiones, se ha venido logrando que se libren algunas cantidades de otros artículos del presupuesto para impedir que quede abandonado el Alcázar de los Reyes de Granada, y para atender a las reparaciones perentorias, sino al mismo tiempo que fuera reconocido definitivamente la prohibición de enajenación del bien inmueble y su contorno: Necesario es, por lo tanto, impedir que se reproduzca la idea de la venta, y que quede consignado por el medio permanente de una ley que la Alhambra con todas sus pertenencias se exceptúa de la enajenación; que el Estado debe conservarla, y que anualmente se ha de incluir en los presupuestos la correspondiente partida para atender a los gastos de su conservación y a las importantes reparaciones que es forzoso emprender en ella, por lo que se subrayaba el carácter público del enclave nazarí: Todo lo que forma parte de la Alhambra debe hallarse en poder del Estado, incluso aquellas zonas que habían sido ocupado por la propiedad privada, en el que el Estado debía de recuperar: Y no basta que se conserve en poder del Estado todo lo que poseía de la misma el Patrimonio de la Corona cuando se hizo aquella ley. En varias épocas se han verificado enajenaciones de terrenos y de edificios que forman parte de la Alhambra, alzándose en algunos de los primeros construcciones que son impropias de aquel sitio, y verificándose en los otros obras y reparaciones que destruyen sus condiciones artísticas, determinando además los efectos del ejercicio del derecho de propiedad en lo adquirido por los particulares, daños a los que no ha sido enajenado. No hay en ella cosa alguna que no tenga valor bajo el punto de vista histórico o arqueológico, y forzoso es que el Estado recupere lo que ha pasado a propiedad ajena a la suya, y que no haya más dueño que él dentro de los límites de la Alhambra.*

Ante estas circunstancias se propondría en el proyecto de ley que la Alhambra de Granada y la huerta del laurel de la Zubia, que el Estado conservará en su poder a perpetuidad, declarándola comprendidos en el número segundo del art.2º. de la ley sobre desvinculación y venta de los bienes del Patrimonio que fue de la Corona, aprobada y sancionada por las Cortes Constituyente en 9 de diciembre de 1869 (art.1º). Se establecía por primera vez el conjunto de bienes que formaban la Alhambra que estarían formado por el palacio árabe, todos los edificios, construcciones y terrenos que se hallan dentro de las murallas de la misma, éstas, sus torres y adarves, los jardines, paseos y bosques que la circundan con todas las construcciones que hay en ellos, la acequia del Rey y las aguas que conduce, y cuanto antes de ahora le haya pertenecido (art.2º), así como la Huerta del Laurel, el terreno que lleva este nombre, como la iglesia que hay en él y las casas dependencias, de la una y del otro a aquella adyacente (art.3º). Se insertaría un presupuesto para la conservación del recinto, así como las obras de reparación necesaria (art.4º). Como novedad trascendental se incluiría el derecho del Estado a recobrar, en la forma que sea procedente y a medida que vaya siendo posible, los terrenos, construcciones y edificios de la Alhambra que han sido enajenados (art.5º).

#### 1.3.4. La transformación jurídica del Monasterio de El Escorial como bien de interés público durante el Sexenio Revolucionario.

El Monasterio del Escorial había estado incluido en la lista de bienes pertenecientes a al uso y servicio de la Corona en la ley de 1865, quedó fuera de la misma con la promulgación de la ley de 1869. Sin embargo, durante la I República se fue decretando una serie de disposiciones en orden a su conservación y a su uso, tanto como bien de interés espiritual, al seguir manteniendo su status de edificio religioso, como bien de interés histórico-artístico. Con la promulgación del **Decreto de 29 de mayo de 1869** se mandaría formar una colección ordenada, por épocas y escuelas, de los tapices que existen en los edificios del Patrimonio que fue de la Corona. En la Exposición de Motivos se exaltaba los valores que la Revolución había impregnado al mundo cultural, por lo que consideraba que las ricas colecciones de tapices que habían sido incautada a la Corona, y que se conservaban en los distintos palacios reales se habrían convertido en patrimonio nacional, al considerase testimonio no solamente de una rica tradición industrial española sino de los propios valores históricos y artísticos de que estaban imbuidos: *En el Palacio de Madrid, en los de Riofrío, San Idelfonso, el Pardo, Aranjuez y San Lorenzo, lo mismo que en casi todas las dependencias del Patrimonio que fue de la Corona, la revolución ha encontrado esparcidas preciosidades artísticas, entre las cuales figura en primera línea la colección de tapices, tan rica por su mérito, como por ser bastante en número para formar la historia de una industria que, nacida, puede decirse, en Arras, desenvuelta en Génova y Venecia, llegó a adquirir más tarde en la fábrica de Madrid notable desarrollo.* La divulgación pública de este patrimonio nacional que había sido sustraído a la Corona necesitaba de un local para su exposición, por lo que al no poder ser utilizado el Museo del Prado, se planteo la necesidad de utilizar para ello el amplio inmueble del Escorial: *lo urgentes es hoy buscar un local a propósito que guarde y exponga convenientemente al público nuestra rica colección de tapices (...) Lleno el Museo del Prado, hacinados los objetos por falta de sitio en los demás Museos, falto Madrid de edificios de Estado donde establecer servicios públicos de importancia reconocida, solamente el Monasterio del Escorial, monumento del arte considerado como una maravilla, parece convidar con su templo y su Biblioteca a que sus espaciosos claustros y galerías reciban y alberguen los bellos y numerosos tapices llamados a formar, con los demás objetos de arte que tan famoso edificio encierra, un Museo del Renacimiento.* De esta manera se fundaría un museo en el que se instalaría los tapices que existen en los edificios del Patrimonio que fue de la Corona, se elegirán los más a propósito para formar una colección ordenada por épocas y escuelas, la cual será expuesta al público en el monasterio de El Escorial (art.1), para lo que se asignaría el correspondiente presupuesto, con cargo a los productos que se obtengan de la venta en pública subasta de los objetos de desecho que se hallan en los sótanos de Palacio (art.2), se nombraría una comisión de personas competentes formará el oportuno catálogo razonado, y vigilará todo lo concerniente a la instalación del expresado Museo (art.3) y se designaría a la Dirección del Patrimonio que fue de la Corona para proponer las medidas convenientes para la ejecución del presente decreto(art.4).



Sería la Biblioteca Escularense objetivo de tutela pública durante la I República, por lo que sería promulgado por el Ministerio de Hacienda el **Decreto de 16 de octubre de 1869** disponiendo que una Comisión compuesta de los individuos que elija de su seno la Directiva del Museo de Tapices del Escorial, examine los documentos relativos a las Bibliotecas de este punto y del Palacio, y proponga los medios oportunos para que ambas puedan ser abiertas al público. En la Exposición de Motivos se señalaba la riqueza bibliográfica que se había ido reuniendo a lo largo de su historia: *La Biblioteca Escularense, formada por el celo y sabiduría del célebre historiador Ambrosio de Morales, enriquecida desde su fundación con donaciones y compras de tesoros bibliográficos que pertenecieron a los varones más doctos y eminentes, así como también con la adquisición de muchos volúmenes de la Capilla Real de Granada; de los monasterios de la Murta, Poblet y Roncesvalles; de las librerías del Marqués de los Vélez y del Emperador de Marruecos Muley Zidán; de gran número de libros prohibidos, llevados allí de los Archivos de la Inquisición; y contando, en fin, más de 4000 manuscritos, códices y vitelas, algunas de las cuales se remontan al siglo X, rarísimos incunables, magníficas ediciones, autógrafos preciosos, estampas y dibujos por todo extremo admirables, es la Biblioteca que goza ha más de tres siglos en el mundo entero de la justa y merecida celebridad a que la hacen acreedora tantas y tan peregrinas riquezas. De la misma manera se hacía mención de los valores históricos y artísticos en que se insertaban en la identidad del edificio: Y no solamente los volúmenes de la Escurialenese han contribuido por sí a crear la fama de su nombre: las artes todas con gran acierto, espléndida ostentación, elevación de ideas y bellezas de formas erigieron de consuno armónico recinto por su severidad, lujo y proporciones para guardarlos. Pavimentos de limpios mármoles, grandiosa estantería dórica, diseñada por Juan de Herrera, y primorosamente ejecutada por Giuseppe Flecha; encuadernaciones de seda y oro, pinturas murales de elevado estilo, correcto dibujo y meditada composición, que consignan en paredes y bóvedas la apoteosis de las ciencias y artes liberales, forman de ella la más artística y monumental de todas las Bibliotecas. Con este fundamento se establecía que la biblioteca del Escorial tendría que permanecer unida, sin dispersarse: Unidas en un solo cuerpo las letras y las artes, los libros y el recinto que ocupan los tesoros bibliográficos y la caja que lo custodia, deber es guardarlos como hasta aquí sin alterar en nada tan precioso engarce, con todo su carácter, en toda su pureza, a fin de que el monumento levantado en días de saber y prosperidad continúe incólume para transmitirlo, tal como lo recibimos de nuestros mayores. Desmembrar la Biblioteca del Escorial, despojarla de cualquiera de su ramo, trasladar sus libros a otro punto, equivaldría a dejar desierta, huérfana, profanada la mitad de su ser, con grave daño de nuestra reputación literaria, exponiéndonos a la crítica acerba y justificada de propios y extraños.*

Con la promulgación del **Decreto de 24 de febrero de 1874** declarando subsistente el contrato y la concesión hecha a la Congregación de Padres Escolapios respecto del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y modificando la cláusula 8ª en el sentido que se determina. El destino del edificio aparece reflejada en la Exposición de Motivos: *Al extinguir la ley de 18 de diciembre de*

*1869 el Patrimonio que fue de la Corona y revertir en pleno dominio al Estado los bienes y derechos anejos a la misma, destinó algunos al uso y servicio del Monarca, entre ellos el Monasterio de San Lorenzo El Escorial, con su palacio, huertas y jardines, así como los muebles, adornos y objetos de arte, después de segregados los que hubieran de enajenarse o trasladarse a los Museos Nacionales. Desde el momento de su advenimiento al Trono entró Don Amadeo de Saboya al usufructo de los bienes que dicha Ley reservó a la Corona; y tributo de justicia es consignar el noble espíritu y rectos propósitos que le animaron cuando más tarde estimó de toda conveniencia ceder a la congregación de las Escuelas Pías el uso de dicho Monasterio con destino a la enseñanza pública, pero dentro de condiciones con esmero encaminadas a su conservación y custodia, a levantar sus cargas piadosas y al mayor esplendor del culto. Las bases de esta cesión fueron sometidas al acuerdo del Consejo de Ministros, y aprobadas por este en 9 de octubre de 1872, tuvo lugar a seguida el cumplimiento de aquel acto, mediante el correspondiente Real Decreto y la oportuna escritura notarial. Más a poco sobrevino la abdicación del Monarca; quedó vacante el Trono: se estableció el Gobierno de la República; las Cortes Constituyentes, por su ley de 24 de julio último, dispusieron que el Ministerio de Hacienda se incautase de todos los bienes que pertenecieron al Patrimonio de la Corona, y que continuase administrándolos ínterin la comisión nombrada por las Cortes para encargarse de dichos bienes emita dictamen acerca de la clasificación y destino definitivo que debían darse a los mismos; y esa serie de importantes sucesos y resoluciones dio lugar a dudas acerca de la subsistencia y validez del convenio celebrado con la Congregación de las Escuelas Pías. Al mismo tiempo exponía las controversias con los particulares que habían recurridos al Gobierno solicitando el arrendamiento temporal del Monasterio con destino a colegio de primera y segunda enseñanza, y la expresada Congregación reclamó a su vez el cumplimiento del convenio, puntualizándose como la comunidad escolapia podía equilibrar el interés público de la enseñanza con la conservación del propio inmueble: Por una parte se ve la demanda en pro de la enseñanza pública, pero revistiendo a todas las luces las formas de la especulación; por otra, la invocación de un pacto solemne hecho por un instituto religioso que, ceñido á la estrecha línea de sus deberes, ha sabido consolidar su existencia y enaltecer su prestigio á través de las vicisitudes de los tiempos; que ofrece además el perfecto consorcio del ministerio de la enseñanza con la más garantizada conservación del templo del Escorial, de la riqueza artística y literaria que atesora, y del culto más adecuado a su objeto e importancia, por lo que fundado en las precedentes consideraciones el Gobierno de la República, en Consejo de Ministros, y a propuesta del de Hacienda, declaraba subsistente el contrato y la concesión que, a virtud del acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 1872, se hizo a la Congregación de Padres Escolapios respecto del Monasterio de San Lorenzo del Escorial dentro de los límites, condiciones y objetos que dicho contrato determina, debiendo cumplirse el mismo por la Nación, como subrogada en los derechos del último Monarca (art.1º).*

**1.3.5. La impronta de la ley de 1869 sobre el coleccionismo público en la I República: La concepción del Museo de Prado como Museo Público.**

Con la Revolución del 68 se produciría un hecho trascendental: la nacionalización del Museo, comenzándose a llamar el Museo Nacional de Prado, por lo que se proyectaría la fusión del Museo de la Trinidad con la del Prado. En 1872 el edificio de la trinidad, sería ocupado por las dependencias del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, por lo que se fue abriendo la idea de unir sus fondos con los del Prado, tesis defendida en el mismo año de 1868 por el pintor Vicente Poleró en un ensayo titulado Breves observaciones sobre la utilidad y conveniencia de reunir en uno solo los dos museos de pinturas de Madrid<sup>2471</sup>. A raíz de la publicación del Decreto de 25 de noviembre de 1870, siendo ministro José Echegaray, se nombraría una Comisión con el fin de proponer al Gobierno las bases para refundir en uno los Museos Nacionales de Pintura y Escultura del Prado y de la Trinidad, designando los objetos que deben incorporarse al mismo, que siendo propiedad de la Nación se hallen en poder de corporaciones o establecimientos oficiales o particulares. Aunque las razones de la unión no está resuelta, como ha señalado Gaya, probablemente estaría el deseo de obstaculizar cualquier reclamación posterior por parte de la Corona de los fondos del Prado, ahora nacionalizados<sup>2472</sup>. En la Exposición de Motivos se precisaba como por la ley general de desvinculación de los bienes que constituían el Patrimonio de la Corona quedó como propiedad de la Nación y bajo la dependencia del Ministro de Fomento, el Museo de Pintura y Escultura del Prado, aludiendo la posesión de otro Museo Nacional, formado de las obras de arte que pertenecieron a las suprimidas comunidades religiosas, y de otras adquiridas por el Estado con los fondos que anualmente se destinan a este objeto o procedentes de las Exposiciones nacionales de Bellas Artes. Los problemas de conservación y la mejora en su divulgación hicieron proyectar la fusión de ambos, ya que el Museo del Prado le había sido destinado un edificio monumental, mientras que el segundo, el de la Trinidad, se alojaba en las salas de este Ministerio de una manera provisional, por lo que ocultaba *las verdaderas joyas artísticas que posee en los despachos de unas oficinas donde su conservación ofrece peligros diarios y en las que no tienen entrada ni pueden tenerla los que desearían apreciar, conocer y copiar las obras de arte que la forman*. Al pertenecer ahora los dos a la Nación, *no hay nada que justifique el que se hallen separados, cuando deben sin duda alguna completarse mutuamente, y vivir unidas y expuestas a la admiración de propios y extraños (...)* Juntas todas podrán formar inapreciables colecciones en que estén representadas las diversas épocas del arte, formando las páginas de su historia sus diferentes escuelas, y contando como base con las obras modernas adquiridas, se conseguirá también en breve un Museo contemporáneo en que figuren cuadros y estatuas firmadas con nombres que han sido premiados en las Exposiciones más celebradas en el extranjero. Se había dado con ello un paso primordial en la institucionalización del coleccionismo público, uniéndose además el propósito

---

<sup>2471</sup> ALCOLEA, S. *Museo del Prado*, Barcelona, 1991, p.63.

<sup>2472</sup> GAYA, Juan Antonio “El Museo Nacional de la Trinidad (Historia y catálogo de una pinacoteca desaparecida)” *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, T.LV, 1947, p.24.

de elaborar un inventario en la que se incluyeran un mejor conocimiento de las obras adquiridas por el Estado. Con este objeto se nombraría una Comisión *de personas notoriamente competentes en el asunto, que indique los medios de refundir en uno solo los Museos del Prado y de la Trinidad, y las obras de pinturas, esculturas, y grabado que se le tenga que agregar de las que estén fuera de ambos; que las clasifique, que establezca reglas para la formación de un inventario-catálogo y de un reglamento para su régimen ordinario, que proponga la planta y condiciones de los empleados; y, en fin, que penetrada de la importancia del servicio que a su distinguida ilustración se encomienda, inicie al Gobierno en cuanto sea necesario y conveniente hacer para que nuestro Museo, conserve no solo el alto nombre que ya tiene, sino que levante su fama hasta donde lo merecen las muchas y valiosas obras que la forman.* La Comisión sería nombrada bajo la presidencia del Sr. D. Manuel Silvela, y estaría compuesta por D. Eduardo Fernández Pescador, Académico de San Fernando; D. Juan Facundo Riaño, Profesor de la Escuela Especial de Pintura y Académico de la Historia; D. Gabriel Rodríguez, D. Rafael Prieto y D. Francisco Pi y Margall, Diputados a Cortes; D. Antonio Gisbert, Director del Museo del Prado; D. Cosme Algarra, Director del Museo de la Trinidad; D. Simeón Avalos, Director de la Escuela Superior de Arquitectura; D. Carlos Luis de Rivera, Director de la escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado y D. José Gragera, Subdirector del Museo del Prado, que ejercería las funciones de Secretario, con el fin de proponer al Gobierno las bases para refundir en uno los Museos Nacionales de Pintura y Escultura del Prado y de la Trinidad, designando los objetos que deben incorporarse al mismo, que siendo de propiedad de la Nación, se hallen en poder de corporaciones o establecimientos oficiales ó particulares (art.1º), proponiendo asimismo la clasificación histórica y artística de los cuadros, estatuas y grabados de la colección del museo, las bases para la formación de un inventario-catálogo razonado de dichas obras, la planta del personal facultativo y administrativo de los empleados, y las condiciones de idoneidad que deban exigírseles y el reglamento por el que el Museo ha de regirse en lo sucesivo (art.2º).

Por fin, por **Real decreto de 22 de marzo de 1872** sería incorporando al Museo del Prado, el de Pintura y Escultura de la Trinidad, fundamentada en el hecho de que *ante la contingencia de que una sola obra de arte puede desaparecer con menoscabo y desprestigio de la patria de Murillo, toda precaución es poca; y si a esto se agrega el que la existencia de los dos Museos origina forzosamente la duplicidad de cargos administrativo, y por consecuencia mayor gasto, únese a la razón esencial de patriotismo la de la necesaria economía en los servicios que pesan sobre los fondos generales del Estado.* Sería el Director del Museo del Prado el encargado de hacerse cargo inmediatamente de las obras de arte, inventarios, muebles y enseres de todas clases del antiguo Museo Nacional (art.2), y al mismo tiempo bajo su juicio seleccionaría las obras que debían ser trasladadas al Museo Nacional, exponiéndolas al público *con preferencia a los de menos importancia, hasta tanto que, arbitrándose recursos, se*

*amplíe suficientemente el edificio para dar cabida a todas(art.3). Un paso más a la divulgación del Patrimonio Nacional sería la promulgación del **Decreto de 14 de noviembre de 1873** disponiendo que el Museo Nacional de Pintura y Escultura publique anualmente una Memoria en que se den a conocer sus adquisiciones, cambios y organización, y se insertasen Monografías de los cuadros y estatuas más notables que poseyera, organizándose una serie de conferencias públicas. La configuración del Museo como servicio público de divulgación de cultura entre los ciudadanos queda reflejada en la Exposición de Motivos: Si los Museos en que se guardan los más ricos tesoros de la inspiración artística han de ser algo más que una colección de preciosidades y han de cumplir un fin verdaderamente educador, fuerza es que en ellos a la viva enseñanza que de la contemplación de la obra de arte se desprende, se unan, mediante la enseñanza oral, el comentario crítico, la disquisición histórica y la disertación estética que completen y perfeccionen aquella. Conviene asimismo al mejoramiento de la cultura que los Museos cuiden solícitamente, no sólo de dar a conocer por medio de los catálogos las riquezas artísticas que poseen, sino de dar cuenta anualmente de las nuevas adquisiciones que hacen, como de las alteraciones que en su organización se verifiquen, publicando a la vez trabajos críticos sobre las obras más importantes de que sean poseedores. De esta manera, serán los Museos focos de ilustración teórica y práctica, y escuela perennes de buen gusto, no solo para los que el cultivo del arte se consagran, sino para los que, sin considerarle fin especial de su vida, le estiman como necesario elemento de su cultura general. Si el arte es un poderoso instrumento de educación para los pueblos; si su cultivo es señal inequívoca de progreso en las naciones y de elevación de espíritu en el individuo, a popularizarle, a hacerle accesible a todas las clases, a dar a su enseñanza el carácter práctico que la contemplación de la obra engendra, y el carácter teórico que la enseñanza científica produce, debe consagrar sus esfuerzos los Gobiernos cultos, seguro de que el arte compensa la protección que del poder recibe, despertando en los ciudadanos aquellas elevadas ideas, acendrando afectos y nobles propósitos que solo se desarrollan en el espíritu bajo la influencia bienhechora de la belleza.* Cabe mencionar que al mismo tiempo sería reorganizada la plantilla del propio Museo Nacional de Pintura y Escultura a raíz de la promulgación del **Decreto de 1 de noviembre de 1873** (Gaceta de Madrid, núm.323, 19 de noviembre de 1873, p.464) considerando que al aumentar los fondos de la colección debía incrementarse obviamente el personal del Museo.

#### **1.4. La tutela pública del Estado sobre el Patrimonio Monumental Municipal.**

##### **1.4.1. La tutela públicas de las construcciones civiles en el Sexenio Revolucionario.**

Las construcciones civiles se convierten en objeto de regulación por parte de los Gobiernos Revolucionarios, en un interés de controlar la planificación urbanística que por parte de las Corporaciones Municipales habían iniciado la polémica modernización de sus localidades. En este trabajo nos centramos en aquellas medidas que tutelaran aquellos que por su interés



histórico y artístico pudieran ser objeto de una peculiar protección. Una primera medida primordial en el ámbito de la protección monumental fue la supresión de los Arquitectos Provinciales por el **Decreto de 18 de septiembre de 1869** suprimiendo la clase de Arquitectos provinciales, que habían sido creados por el 1º de diciembre de 1858. La medida aparecía reflejada en la propia Exposición de Motivos: *El Real decreto de 1º de diciembre de 1858, estableciendo la clase de Arquitectos provinciales no está en armonía con la ley orgánica de Diputaciones, ni con el espíritu descentralizador que la revolución de setiembre llevó a todas las esferas de la Administración Pública. Cuando los Gobernadores eran, no solamente los representantes del poder central en las provincias, sino los verdaderos administradores de sus intereses, estando reducidas las Diputaciones en la mayoría de los casos a desempeñar atribuciones meramente consultivas, se comprende bien que los Arquitectos, aunque pagados del presupuesto de la provincia, porque a este se aplicaban especialmente sus servicios, dependiesen, sin embargo, del Ministerio de Gobernación y estuviesen a las órdenes de aquellas autoridades. Pero hoy, que la acción de las Diputaciones Provinciales se desenvuelven en círculos más anchos y tienen dichas corporaciones una intervención casi decisiva en el ramo de construcciones civiles, no se explica que los agentes encargados de estudiar los proyectos y de dirigir las obras que aquellas acuerden, continúen bajo la dependencia del Gobierno y a las órdenes inmediatas de sus delegados. De esta manera se dispondría que las Diputaciones nombraran a los Arquitectos que fueran necesarios para dirigir las construcciones civiles que fueran pagados de su presupuesto, así como el personal auxiliar correspondiente (art.2º), correspondiéndole hacer los planos, proyectos, presupuestos y pliegos de condiciones de las obras provinciales y municipales; levantar y rectificar los planos de las poblaciones y ejecutar las tasaciones, reconocimientos y demás trabajos facultativos que les encargue las Diputaciones y evacuar los informes que estas corporaciones les pidan en lo relativo a su profesión, y proponer las mejoras que crean convenientes a los edificios de la provincia (art.3º).*

En el **Real decreto de 21 de marzo de 1871** serían declaradas caducadas las concesiones de edificios y terrenos de propiedad del Estado que no hubiesen sido destinados a los objetos para que fueran otorgados. En su Exposición de Motivos se aludía a aquellos edificios que deberían de haber sido protegido desde las medidas desamortizadoras al recordar *glorias imperecederas, incluso otros cuya construcción era de por sí un monumento histórico, quedaron exceptuadas de la venta, verificándose a más no pocas excepciones, fundadas en el deseo de ayudar a las corporaciones, de facilitar local a la enseñanza o d cooperar al desarrollo de la industria. Sin embargo, se consideraba que estas excepciones no podían tener importancia cuando la masa de bienes nacionales era tal, que el Estado podía muy bien usar de esta generosidad. Pero transcurrido ya largo tiempo después de las primeras concesiones, se ha visto que muchos de ellas fueron hijos de buen deseo, pero carecieron de posibilidad de llevarse a cabo; y que otras, sin obedecer a los mismos fines, no podían servir ni utilizarse en el destino a que se dedicaban, por lo que se consideraba que las antiguas concesiones hechas en las primeras épocas*

desamortizadoras en muchos de los casos ya no tenía objeto, y algunas habían dado lugar a abusos que no deben consentirse, por lo que debían ser reintegrado al Estado de, siempre que no se hubieran dedicado al fin para que se le concedieron, o que hubiera desaparecido el objeto de la concesión, por lo que se declaraban caducadas las concesiones de edificios y terrenos de propiedad del Estado, hechas en virtud del Real decreto de 19 de febrero de 1836 y de la ley de 1º de junio de 1869, así como las disposiciones particulares posteriores, a corporaciones o personas que no le hubiesen destinados a los objetos para los cuales le fueron destinados (art.1º). Sería las Administraciones económicas de las provincias las que procederían a formar un inventario especial de los edificios y terrenos de propiedad del Estado que se hallasen destinados a uso público o a servicios de las Diputaciones provinciales, de los Ayuntamientos o de cualquiera otra corporación, comprendiendo en el mismo los terrenos y edificios que se hallasen en poder de dichas corporaciones y no tengan en el día destino especial (art.2).

Los distintos Gobiernos del Sexenio Revolucionario intentaron limitar las atribuciones urbanísticas de las Corporaciones Municipales por lo que se promulgaría de 8 de enero de 1870 en las que quedaban reguladas las atribuciones de los Maestros de Obras, generando en muchos momentos, controversias con las propias Corporaciones Municipales, como podemos apreciar en la **Real Orden del 23 de enero de 1872**, por el que preveía a los Ayuntamientos y corporaciones que se atengan estrictamente a los reglamentos y órdenes que rigen en materia de atribuciones y derechos de los facultativos que intervienen en la construcción y dirección de los edificios, así como los que se refiere a la policía, ornato público y salubridad de las poblaciones, disposición que había sido promulgada a raíz de la exposición presentada en el Ministerio por el Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos denunciando los abusos cometidos por el Ayuntamiento del Ferrol, relativos *á la admisión por el mismo de planos para la construcción de edificios, y licencias dadas para dirigir obras á personas que no están autorizadas para tal objeto, haciendo caso omiso y faltando por consiguiente a lo dispuesto en el decreto dado por la Regencia en 8 de enero de 1870, en el que se determinan clara y explícitamente las condiciones legales que deben tener las personas encargadas de los proyectos y dirección de las construcciones urbanas*. En la **Orden de 24 de mayo de 1873 del Gobierno de la República**, se dictarían las reglas que debían de adoptarse para la resolución de los expedientes promovidos sobre construcciones civiles, referentes a las obras de reparación, reformas y restauraciones que deben practicarse en los diferentes edificios que tienen relación con los mismos, como igualmente los relativos a aquellos que deben ser considerados como monumentos históricos, considerándose que había llegado el momento de que por parte de la Administración *se manifiesten sus ideas con objeto de que, sujetándose a ellas los agentes llamados a intervenir directamente en la resolución de los expedientes promovidos sobre construcciones civiles, armonice sus trámites, imprimiendo desde*

*su origen una marcha regular y uniforme.* De ahí que se dispondría que los jefes de los establecimientos políticos, ya fueran Universidades, Bibliotecas, Archivos, Museos o Monumentos Históricos, una vez obtenida la autorización de los centros de que dependan, remitirían a la Dirección general de Obras Públicas los proyectos de las obras nuevas, reparaciones o reformas, compuestos de Memorias, planos, presupuestos y pliegos de condiciones facultativas y económicas (art.1º), teniendo que ser supervisado por la Real Academia de San Fernando todos los proyectos de obras de nueva construcción y los de reparación o reforma, cuando éstas afecten a fachadas, capillas, paraninfos y salones decorados, con el fin de conocer su dictamen antes de que se dicte resolución por la Dirección general (art.2º), siendo supervisado la redacción de los proyectos, al tener que ajustarse en lo posible, bien a los formularios de construcciones civiles circulados por el Ministerio de la Gobernación, o bien a los de Obras Públicas en aquellos que pueda aplicarse; aunque se dejaba excepcionalmente a los autores toda la libertad que para exponer su concepción artística crean necesaria (art.3º). Una vez enviada los proyectos a la Dirección general de las Obras Públicas (art.4º), sería nombrada una Junta compuesta del Jefe del establecimiento con el carácter de Presidente; del Arquitecto-Director de la obra y del Ingeniero de Caminos, Jefe de la Provincia, con el de Vocales de las mismas y de un Secretario con voz, pero sin voto, nombrado por la Dirección general de Obras Públicas a propuesta del Presidente; el cual, además de sus funciones propias, desempeñaría el cargo de Interventor de pagos de las obras (art.5º), que tendría entre sus funciones trazar la marcha de los trabajos, autorizar las cuentas y certificaciones, así como la recepción de las obras, y evacuar los informes que para resolver los incidentes y las reclamaciones que sobre las mismas ocurran; puedan pedírsele por la Dirección General de Obras Públicas (art.6º).

#### **1.4.2. La demolición de los arcos y puertas urbanas por declaración de ruina.**

Como había ocurrido en los inmuebles religiosos, durante la etapa revolucionaria se siguieron derribando puertas, murallas y todo tipo de inmuebles que eran considerados un obstáculo para una pretendida modernización urbanística, que escondía sin más una pretendida defensa de los intereses particulares.

##### *La Puerta de Noguera (Jaén).*

El caso de la Puerta de Noguera en Jaén y la casa particular del presbítero Miguel López de Palma. Durante la Edad Moderna los vecinos aprovechaban las murallas adosando viviendas a ellas, a pesar de la prohibición establecidas en las propias ordenanzas, aunque en la práctica los propios ayuntamientos lo autorizaban a cambio de imponer censos, por lo que en el caso de la casa del presbítero López de Palma tenía un censo perpetuo a favor

de la ciudad de 30 reales. Ya en el siglo XIX se va a producir como norma común el derribo de las puertas de las murallas y otros elementos de las ciudades que se encontraran en estado ruinoso, alegando no solamente el estado de peligro del inmueble sino en la mayoría de los casos, el ser un obstáculo para la circulación de personas y cabalgaduras. De ahí que el arquitecto municipal, José María Cuenca, tras una inspección realizada en virtud del Real Decreto de 14 de marzo de 1860, denunció en escrito de 5 marzo de 1867, el estado lamentable del arco, notificando al mismo tiempo a la autoridad municipal que los dueños de las casas anexas al arco tenían que apuntalarla en el plazo de tres días, para lo que el propio arquitecto presentaría los planos de fachadas y alineaciones de calles al ayuntamiento, poniéndolo además en conocimiento del propio Gobernador. Sin embargo, uno de los propietarios, D. Rafael Caro, se opondría al derribo del arco, interponiendo en 1872 un recurso de alzada contra el acuerdo del Ayuntamiento que autorizaba el derribo del arco. El Alcalde Constitucional de Jaén respondería el 19 de julio de 1872, en los siguientes términos: En contestación a la atenta comunicación de V.E. fechada el 7 del corriente, debo manifestar que el Arco llamado de Noguera, en esta ciudad, subsiste en estado ruinoso, habiendo sido demolido las habitaciones que sobre el mismo había. Respecto a las Ordenanzas municipales que se sirve pedirme adjunto tengo el honor de remitir a V.E. el Bando de Buen Gobierno, por el cual viene rigiéndose esta Municipalidad. En el Informe del Presidente de la Comisión de Ornato fechada el 1 de mayo de 1872 dejaba claro los presupuestos del derribo del arco y de las casas anexas a la misma, a pesar de que fueran de propiedad particular: en todas las poblaciones donde existen edificios de esta naturaleza se hacen por sus autoridades administrativas cuantos esfuerzos le son posibles para que desaparezcan pues está prácticamente reconocido que no son convenientes para el ornato y salubridad pública, ni mucho menos para la seguridad y comodidad del tránsito (...) en cuanto a la situación de este arco respecto a las calles que le están inmediatas, basta el sentido común para comprender que no pueden ser pues forma una doble revuelta, con todas las malas condiciones que se puede imaginar (...) <sup>2473</sup>.

#### *La defensa de la Torre del Oro (Sevilla).*

En 1866 mediante un oficio de la Real Casa y Patrimonio, dirigido al teniente de alcaide de los Reales Alcázares el 9 de marzo con la petición de la venta de la torre almohade. Otro oficio fechado el 17 del mismo mes, sería notificado que por orden de la Reina se suspendiese la venta en pública subasta de la torre. Posteriormente, el 7 de enero de 1870, se tomaría la posesión del inmueble por la Marina, a quien se le cedería en usufructo, para sede de las

---

<sup>2473</sup> RAMIREZ DE JUAN, Eloísa “La puerta de Noguera y la casa del presbítero Miguel López de Palma (Jaén)”, *Arqueología y Territorio Medieval*, 12.1. Universidad de Jaén, 2005 pp.95-97.

oficinas de la Comandancia y Capitanía del Puerto. Sin embargo, al año siguiente, se sigue estimulando su derribo, por lo que la Real Academia de San Fernando dirigiría al Ministerio de Hacienda, fechado en 17 de mayo de 1871, que se solicitaría que no se vendiese ni derribase la torre, por lo que en el oficio posterior del 27 de junio dirigido al Ministerio de Fomento sería solicitado que fuese declarada la torre Monumento Nacional, que paradójicamente no tendría lugar hasta el 5 de junio de 1931<sup>2474</sup>.

## 2. Una incipiente tutela pública del Patrimonio Monumental en el régimen de Alfonso XII (1874-1885).

El advenimiento del proceso político conocido por la historiografía como Restauración abre un nuevo capítulo en el seno del propio Estado Liberal, que debido a las diferentes convulsiones vividos en este largo periodo, le llevaría a su crisis definitiva. Será un periodo largo en la historia convulsa de España, que abarcaría de desde 1876 hasta 1923, iniciándose con los reinados de Alfonso XII, la posterior Regencia de María Cristina por la muerte prematura del monarca, y el advenimiento en 1903 de su hijo, el futuro Alfonso XIII. Como apunta C. Darde, *la Restauración supuso un nuevo punto de partida en la trayectoria del régimen liberal en España. Algo importante cambió efectivamente en la política española tras la proclamación como rey de Alfonso XII, en diciembre de 1874*<sup>2475</sup>. Durante la Restauración, la tutela institucional del mundo cultural, como había ocurrido en las etapas anteriores, se proyecta en la configuración de una verdadera institucionalización, que iría regulando los gustos estéticos de la población, la propia creatividad artística e incluso los valores inherentes a los mismos. Un claro ejemplo va a ser la política institucional en torno a la organización administrativa de las Exposiciones Generales de Bellas Artes, convirtiéndole en uno de los escaparates del régimen político, como podemos comprobar en la lectura de la Exposición de Motivos del **Real decreto de 7 de mayo de 1875** aprobando el Reglamento de Exposiciones generales de Bellas Artes y disponiendo que la primera Exposición se celebrará en Madrid en el próximo mes de octubre, donde quedaba plasmado las intenciones del Estado de proteger el mundo artístico: *En medio del general impulso que el reinado de la Augusta Madre de V.M. imprimió a la prosperidad nacional en todas las esferas, no podían quedar desatendido, ni menos olvidadas, las Bellas Artes y las Nobles Artes que en otros tiempos añadieron tantos timbres a las glorias de la patria; y si respecto de las primeras aún resta no poco que hacer, especialmente en lo que concierne á la propiedad literaria, respecto de las Artes, el Real decreto de 28 de diciembre de 1853 creando las Exposiciones Nacionales inauguró una época de lisonjeras esperanzas que el tiempo ha venido á confirmar, puesto que de aquellas arranca el renacimiento*

<sup>2474</sup> FALCON MARQUEZ, Teodoro, “La Torre del Oro en el siglo XIX: Documentos inéditos”, *Laboratorio de Arte*, 6, Sevilla, 1993, pp.221-244.

<sup>2475</sup> DARDE, C. *La aceptación del adversario. Política y políticos de la Restauración, 1875-1900*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, p.20; VARELA ORTEGA, José *Sobre la naturaleza del sistema político de la Restauración Nación y Estado en la España Liberal*, Madrid, Fundación Ortega y Gasset, 1994, pp.172-173



*artístico contemporáneo de España. La creación y plazas pensionadas en Roma para el estudio de las Artes, y las Exposiciones Nacionales, estimularon poderosamente la afición de los artistas que, ansiosos de restaurar las tradiciones patrias, se entregaron al trabajo con entusiasmo, y bien pronto lograron hacerse lugar honroso entre las demás naciones, probando que eran dignos hijos de aquellos ilustres cultivadores de las Nobles Artes que en los siglos XVI y XVII compitieron en gloria con sus más inspirados coetáneos.(...) El Ministro que suscribe ha visto con pena que á medida que se alargaba el periodo de las Exposiciones, las Artes y especialmente la Pintura, iniciaban un movimiento de decadencia, al cual contribuían por una parte los caprichos de la moda que todo lo invade, y por otra la falta de una inmediata protección del Gobierno, que en la época presente es tal vez el único que puede disponer de grandes edificios para dar cabida a los cuadros que por la importancia de sus asuntos exigen que estos sean desarrollados en lienzos de considerables dimensiones. Los cuadros de historia profana o religiosa han ido poco a poco desapareciendo para dejar el puesto á los del género, que por su índole especial, son de más fácil venta y de menor trabajo. Los aficionados en general prefieren esta clase de obras, más en armonía con el gusto moderno, y los artistas no tienen aun desgraciadamente la bastante independencia para hacer dispendios considerables y emplear largo espacio de tiempo en obras a que difícilmente pueden dar salidas. Por eso el arte de la pintura en España, á juicio del Ministro que suscribe, indica una lamentable tendencia á lo pequeño en la forma y hasta en el pensamiento; y por eso es conveniente que el Estado acuda en auxilio de esa juventud, llena de talento y de amor al arte, cuando puede ser arrastrada por el camino del mal gusto. Las Exposiciones dieron siempre en este punto un resultado satisfactorio, y es de esperar que la que V.M. pueda inaugurar en el próximo otoño venga á dar testimonio completo de los adelantos de nuestros artistas (...)*<sup>2476</sup>.

La protección del arte simboliza la exaltación de la identidad española, sus valores patrióticos, la huella de su pasado, como se puede comprobar en la lectura de algunos fragmentos de la Exposición de Motivos del **Real decreto de 13 de agosto de 1875** creando una Junta que forme una colección nacional de retratos de personajes ilustres: *Las Bellas Artes han sido en todos tiempos, no sólo ornato, sino expresión característica de la civilización, y muy en particular en la Europa cristiana, que á ellas debe los monumentos más notables entre cuantos contribuyen á hermohear las ciudades de esta parte del mundo, y á mantener vivo el culto de lo bello, de que tanto provecho reporta la sociedad entera en toda la extensión de sus complicados intereses, desde los más nobles hasta los prosaicos y materiales. El sentimiento religioso, el más íntimo y elevado entre cuantos impulsan las acciones del hombre, ha sido pura e inagotable fuente de las inspiraciones del genio y del talento del artista, y los templos y monasterios han adunado la arquitectura, la pintura y la escultura, para que juntas contribuyesen á vigorizar los sentimientos morales que han enaltecido y dignificado la sociedad europea. Hoy, Señor, los que impulsaron á las generaciones pasadas, o se han en parte modificado, o tiene expresión diferente y acaso de menos elevada naturaleza; y sin ser injusto con*

---

<sup>2476</sup> Colección legislativa de España, Tomo CXIV, Primer semestre de 1875, Madrid, 1875, pp.694-696; Gaceta de Madrid, 8 de mayo de 1875.

*nuestros contemporáneos, se puede reconocer que en lo general no buscan en el arte la satisfacción de necesidades intelectuales y de las de sentimiento, como en épocas que pasaron, pero cuyo recuerdo conserva con religiosa gratitud los amantes de cuanto contribuye a purificar y a ennoblecer la cultura de los pueblos. Debilitadas, por otra parte, las grandes instituciones y las clases a quienes parecía encomendada la dirección de la sociedad, los Gobiernos, herederos de estas variadas influencias, y en los que se ha concentrado una fuerza para el bien, de que carecían cuando no existía la centralización, se han creído obligados a reemplazarlas en su tradicional protección a las Bellas Artes; debiéndose a ello la apertura de tantos Museos como hoy existen de creación reciente<sup>2477</sup>.*

Sin embargo, el afán por definir una verdadera política de protección de aquellos bienes de interés histórico y artístico que pudieran identificarse con el propio Estado quedaba diluido por la falta de una verdadera conciencia patrimonial. Una radiografía muy acertada de esta falta de interés por el Patrimonio Monumental ha quedado reflejado en el artículo de Manuel Gómez Moreno en la revista *La Alhambra* el 20 de octubre de 1884: *Muchas personas hay en nuestros días, tal vez más de lo que parece, a los cuales poco importan los monumentos, de cualquiera clase que sean; desconocen que ellos constituyen la historia de los pueblos, que son testigos de sus glorias pasadas, que con ellos se esclarecen puntos oscuros en los periodos históricos, que nos enseñan las costumbres de los antepasados, sus conocimientos, su literatura, sus artes, y el grado de ilustración y cultura que alcanzaron. Esas personas creen y sostienen que sólo son de estimar las cosas de aplicación positiva; que una casa moderna, blanqueada o pintada de vistosos colores, sustituirá ventajosamente al máspreciado edificio de la antigüedad (...) no aprecian la utilidad que reportan, a la historia y a las letras, esos empolvados legajos que se custodian en los archivos años y años, y las bellezas y gran aplicación para las ciencias, artes e industrias, de esos mil objetos de que se forman los museos arqueológicos. Este modo de pensar es corriente en nuestro país, aun en personas que pasan por ilustradas, respetables a veces por la alta posición que ocupan en la sociedad, y en hombres que realmente tienen conocimientos en las ciencias o en otro ramo del saber humano. No es tampoco raro, entre los que así juzgan en materias de antigüedades, suponer a los aficionados a ellas como de ideas atrasadas, retrógrados, opuestos a los modernos adelantos, y a veces los conceptúan como visionarios y aún maniacos. Además de las personas que así piensan, los hay que gozan en ver desaparecer bajo el golpe del pico demoledor las mejores obras de arte (...) no tenemos necesidad de recurrir a más ejemplo para demostrar lo que dejamos expuesto y de que en España no son muy respetado los monumentos. Es más elocuente el considerar los millares de templos y de edificios de todas clases echados al suelo en las provincias, el sinnúmero de manuscritos perdidos, los centenares de miles de libros vendidos al peso, las preciadísimas obras de arte extraviadas o destruidas, como tantos objetos de valor que la nación atesoraba, sin tenerse en cuenta los sacrificios, las vigiliass, el genio, el talento, el trabajo y los capitales que todo aquello representaba. Imposible es poder calcular los desastres, desolación y ruina llevados a cabo en tan corto tiempo. Y sin embargo, nunca como hoy se ha*

<sup>2477</sup> Colección legislativa de España, Tomo CXVI, Segundo Semestre de 1876, pp.264-266.

*blasonado de ilustración, patriotismo y de amor a las luces. En ninguna época ha habido tan crecido número de academias, liceos, ateneos, centros de enseñanza, corporaciones científicas, comisiones, etc.*<sup>2478</sup>. A pesar de este panorama desalentador, no se puede negar el esfuerzo institucional que en algunos ámbitos se fue realizando durante estos años, especialmente marcado por la revisión que se estaba instando en torno al concepto del derecho de la propiedad. El interés nacional por algunos bienes de interés histórico y artístico dio como resultado la intervención administrativa en algunos inmuebles que aunque pertenecientes al ámbito del dominio particular o de algunas Corporaciones o instituciones públicas o privadas, resquebrajando de esta manera la concepción del derecho absoluto de disposición y gozo del Patrimonio Monumental. Se estaba produciendo en algunos sectores del ordenamiento jurídico un verdadero intervencionismo público fundamentado por el interés general, que abriría el camino hacia una concepción del Estado Intervencionista en el derecho del patrimonio Monumental, tanto de particulares como de Corporaciones Municipales e Instituciones Civiles y Eclesiásticas.

	Patrimonio	Patrimonio Monumental
Periodo de la Restauración	Quiebra del derecho absoluto de la propiedad privada	Quiebra del derecho absoluto de la propiedad privada

## 2.1. La quiebra del derecho absoluto de la propiedad privada en el ordenamiento jurídico español en el régimen de Alfonso XII: el inicio de la crisis del Estado Liberal. (1874-1885).

Uno de los pilares de la legislación de la configuración del Estado Liberal nacido en el ámbito de la Restauración fue el respeto a la propiedad privada, reflejo de la primacía que adquieren los derechos individuales fundamentada en las premisas del primer liberalismo. Como expone A. Menéndez *el Derecho Liberal regula la esfera económica poniéndola a disposición de la autonomía privada de los sujetos económicos (...) el derecho privado se presenta como la “región central” de todo el ordenamiento jurídico; hasta tal punto que todo el derecho público se concreta en la protección de las instituciones jurídicos-privadas*<sup>2479</sup>, o el propio Artola: *El nuevo derecho de propiedad, sagrado e inviolable, es al mismo tiempo “absoluto”, por cuanto atribuye a su titular la más amplia e ilimitada*

<sup>2478</sup> GOMEZ MORENO, M. “Breve reseña de las pérdidas que Granada ha experimentado en sus monumentos y obras de arte en lo que va de siglo” *La Alhambra, Revista decenal de Letras, Artes y Bibliografía*, Año I, Núm.29, 20 de octubre de 1884, p.1.

<sup>2479</sup> MENENDEZ A. *Autonomía económica y Codificación Mercantil española en Centenario del Código de Comercio*. Ministerio de Justicia, 1986, p.60.

*libertad para disponer lo suyo de acuerdo con su personal criterio o capricho. Nada hay en el cielo o en la tierra que pueda enfrentar tan terrible derecho, ningún recurso queda a la sociedad para poner coto a sus excesos y en el caso de una utilización irracional o antisocial de los bienes, no pueda sino contemplar pasivamente la acción del propietario*<sup>2480</sup>. En un amplio sector de la doctrina se seguía defendiendo las tesis absolutistas del derecho de la propiedad como pilar básico del ordenamiento jurídico, como fue el caso de M. Alonso Martínez<sup>2481</sup>. En su faceta de ensayista va a dejarnos dos obras excepcionales para comprender el desarrollo del concepto absoluto del derecho de la propiedad privada a finales del siglo XIX: Estudios sobre filosofía del derecho. Discursos y memorias y Estudios sobre el derecho de la propiedad, ambas publicadas en 1874, textos de referencia en el ámbito del pensamiento jurídico y filosófico del momento, que tuvo como objetivo cohesionar ideológicamente a los grupos sociales dominantes de la España del momento – los propietarios- y generar de este modo el mayor consenso posible en defensa de la propiedad privada. Y es que existe en el liberalismo español un verdadero pavor a que se cuestione la legitimidad de la propiedad privada, que pondría en entredicho a la sociedad oligárquico-liberal estructurada para los propietarios rentistas<sup>2482</sup>. En sus textos se plasman algunas de estas concepciones liberales sobre la propiedad privada que fundamentan la ideología liberal más conservadora del momento: *El derecho de propiedad individual es anterior y superior a la ley escrita o La propiedad es un hecho universal, invencible, de todos los tiempos, que se impone a todos los legisladores y triunfa de todas las revoluciones. Sacratísimo derecho de propiedad, cimiento indispensable de las sociedades humanas (...) La propiedad es, en la sociedad humana, lo que la ley de la gravitación universal en la naturaleza*<sup>2483</sup>. Será en el pensamiento de Cánovas del Castillo donde encontremos la esencia doctrinal sobre el derecho de la propiedad privada del conservadurismo burgués de la Restauración. El político malagueño justificaba la existencia de la propiedad siguiendo en cierta manera la fórmula iusnaturalista del primer liberalismo al considerarla como un derecho natural, un derecho absoluto y exclusivo del individuo, anterior al

<sup>2480</sup> ARTOLA GALLEGÓ, M. *La España de Fernando VII* en Historia de España Madrid, 1968, p.491.

<sup>2481</sup> La figura de Alonso Martínez fue vital en la evolución de la legislación española contemporánea, ya que con solo 28 años fue nombrado Ministro de Fomento, participando en el proyecto de Claudio Moyano de 1857, convirtiéndose a su vez en el alma mater del periodo de la Restauración, especialmente en la configuración de la Constitución de 1876, de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 1882, del Código de Comercio, de 1885, y del Código Civil de 1889.

<sup>2482</sup> MELLÓN, Juan Antonio Manuel Alonso Martínez, el derecho burgués como ideología y pensamiento político en ANTON, Joan; CAMINAL, Miquel *Pensamiento político en la España Contemporánea (1800-1950)*, Teide, 1992, p.300.

<sup>2483</sup> Los textos aparecen publicados en las *Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas* Tomo III; 1875, p.487, siendo citada en ANTON, J.; CAMINAL, M., 1992, pp.303-304.

propio Estado<sup>2484</sup>, concretamente el derecho natural católico, llegando a afirmar que es *desde el principio del mundo hasta ahora la verdadera fuente y la verdadera base de la sociedad humana*. Al mismo tiempo consideraba que debía de existir una autoridad que garantizase su existencia: *La propiedad no puede existir sin que la autoridad la ampare bajo sus alas, y de esto a cada paso tenemos patentes pruebas*. Las tesis de Vicente Santamaría de Paredes sobre el derecho de la propiedad también seguirían la misma línea de defensa a ultranza como podemos comprobarlo en estos fragmentos de su obra *La defensa del derecho de propiedad y sus relaciones con el trabajo*, publicada en 1874: *La propiedad es la fórmula de relación entre el hombre y el mundo material, relación necesaria para el cumplimiento del fin humano, bendecida por Dios desde los primeros albores del mundo y consagrada por todos los pueblos desde sus más remotos orígenes. Para que la propiedad sea justa, es menester que sea adquirida por medio del trabajo (...) sin el trabajo la propiedad no puede existir (...). Desde el momento en que la propiedad se adquiere aparece inmediatamente dos relaciones: una del adquirente con los demás hombres y otra del mismo con la cosa adquirida: por la primera tiene el derecho de excluir a sus semejantes del disfrute de la cosa que legítimamente le pertenece; por la segunda tiene la facultad de disponer libremente de ella, percibiendo todas las utilidades presentes o futuras de cualquier género que sean*<sup>2485</sup>. Por último querríamos citar al entonces profesor de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, Fernández Elías que en su *Novísimo Tratado Filosófico del Derecho Civil Español*, afirmaba hacia el año 1880: *Hoy que los principios de Derecho predominan en la ciencia y en la razón está por encima de mentidas convenciones gubernamentales, el derecho de propiedad de dominio se encuentra perfectamente garantizado. El principio científico, el principio absoluto de propiedad está salvado por completo; no hay voluntad, no hay poder por grande, por omnímodo, que sea bastante a imponer a la voluntad, al poder, a los derechos del individuo; ni la Nación ni el Estado... pueden herirlo en uno de sus derechos eternos, inconclusos, inalienables, por un acto arbitrio de la voluntad; ni la Nación ni el Estado pueden marcar al propietario un derrotero distinto del que en voluntad y en libertad le marcan*<sup>2486</sup>.

La Constitución de 1876 abordaría el derecho de la propiedad en su artículo 10, siguiendo la tónica general que había tenido el constitucionalismo decimonónico liberal, reproduciendo los artículos 13 y 14 de la Constitución de 1869, y resucitando al mismo tiempo, aunque con algunas variantes, el texto de 1837 y 1845, al equilibrar el dominio privado con la capacidad confiscatoria del Estado, pero siempre con la garantía indemnizatoria, como podemos apreciar en la lectura del mismo: *No se impondrá jamás la pena confiscación de*

---

<sup>2484</sup> GONZALEZ CUEVAS, Pedro Carlos El pensamiento político de Antonio Cánovas del Castillo en TUSELL, Javier; PORTERO, Florentino (Eds.) *Antonio Cánovas y el sistema político de la Restauración*, Congreso de los Diputados, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, p.60.

<sup>2485</sup> SANRAMARÍA PAREDES, Vicente *La defensa del derecho de propiedad y sus relaciones con el trabajo*, Memoria premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, 16 de marzo de 1872, Madrid, 1874, p.77.

<sup>2486</sup> FERNÁNDEZ ELÍAS, *Novísimo Tratado Filosófico de Derecho Civil Español*, Madrid, 1880, Tomo II, p.269.



*bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización. Si no procediera este requisito, los jueces ampararán y en su caso reintegrarán en la posesión al expropiado.* Cuando el Ministro de Gracia y Justicia Silvela presenta el proyecto del artículo subrayó la universalidad del derecho, precisando que *la doctrina teológica y el Derecho secular considera la propiedad fundad como algo necesario al hombre –ser cristiano o infiel- que se funda en el Derecho natural y que debe ser respetada y protegida por el Poder Público.* En contra del artículo merece destacar la intervención de Pidal y el Marqués de Sardoal, que veía amenazado el carácter absoluto de la propiedad privada<sup>2487</sup>. En 1882 en la Exposición de Motivos del Proyecto del Código Penal resumiría su concepción del derecho de la propiedad privada: *En ninguno de nuestros cuerpos legales aparece desamparado el derecho de la propiedad, base firmísima de nuestra sociedad, sin que el individuo, ni la familia, ni colectividad alguna podrían humanamente vivir (...). Dominado por convicción tan profunda, claro y seguro es que este gobierno no había adoptar solución alguna que menoscabase o desvirtuarse en lo más mínimo la garantía o sanción penal de derecho tan preciado.*

Se ha defendido tradicionalmente por la historiografía jurídica como con la promulgación del Código Civil en 1889, especialmente el artículo 348 fundamentaría en el ámbito de las relaciones jurídicas del individualismo propietario. Sin embargo, algunos autores como Rafael Colina cuestionan la consideración absolutista que impregnaba al derecho de la propiedad el artículo 348 del Código Civil, aún siendo heredero del artículo 544 del Código francés: *en dicho artículo se suprimió en su texto toda mención expresa al carácter absoluto del dominio. La frase de la manera más absoluta no es recibida en la codificación española (...). A principio del siglo XIX, el modelo dominical burgués expresaba una instancia revolucionaria contra el absolutismo del Estado, así contra la hegemonía de los intereses del clero y de los nobles (...). En 1889 (...) el momento revolucionario quedaba ya lejano. La ideología que le ofreció apoyo perdió toda connotación renovadora para sustentar ahora la privilegiada posición que la clase burguesa había adquirido desde 1789 (...). Por lo tanto, y debido al propio retraso de la codificación, el entusiasmo que había caracterizado la labor del legislador francés, se traduce en moderación para el caso español*<sup>2488</sup>. En el Proyecto de 1882 se incorporaba una nueva definición doctrinal de Tesoro en el artículo 352, y además en el artículo 353, referida a la propiedad de los tesoros, ofrecía una nueva declaración, contrapuesta a la contenida en el artículo 395 del Proyecto de 1851: este Proyecto adjudicaba las 3/4 partes del tesoro al descubridor, y sólo una cuarta parte al dueño del terreno. En el nuevo Proyecto se atribuía la totalidad del tesoro al descubridor que lo halle en el fundo de su propiedad, y solo la mitad cuando el hallazgo casual se haya producido en propiedad ajena o del Estado, solución que había sido tomada anteriormente por los Códigos francés y belga

<sup>2487</sup> MATILLA, M<sup>a</sup> Jesús; FRAX, Esperanza, 1999, pp.36-37. Cabe citar por su interés el debate que se suscitó en el Congreso sobre el derecho de la propiedad: Diario del Congreso, 1876, pp.1222-1226; Diario de Sesiones del Senado, pp.566-577,

<sup>2488</sup> COLINA GAREA, Rafael, 1997, pp.90-91.

(artículo 716), italiano (artículo 714), chileno (artículo 626) y mexicano (artículo 855)<sup>2489</sup>.

Sin embargo, estas convicciones fueron abandonándose en algunos sectores intelectuales, aunque minoritarios, cuyo eco se puede ya observar la propia ciencia jurídica española, probablemente por los cambios que se estaban produciendo en este momento en la doctrina europea. Como apunta José MONEREO PEREZ, el derecho de la propiedad a su vez *siempre preocupó constitutivamente al pensamiento social crítico de esa tendencia heterogénea y dispersa que fue el socialismo jurídico (...) Un aspecto relevante en la reflexión sobre el sentido de la reforma social es la importancia otorgada por esta tendencia a la crítica de la propiedad desde el punto de vista de la afirmación de su función social, limitando su uso individualista y su atributo del poderío social sobre las personas (...)*<sup>2490</sup>. Entre la nómina de teóricos jurídicos que empiezan a poner en entredicho el carácter absoluto del derecho de la propiedad privada se encontraría Giner de los Ríos en su obra *Base para la teoría de la propiedad* (1876); Danvila y Collado, M. *El libro del propietario* (1872); Cárdenas, F. *Historia de la propiedad territorial de España* (1873), Alonso Martínez, *Estudios sobre el derecho de la propiedad* (1874); Santamaría de Paredes *La defensa del derecho de la propiedad y sus relaciones con el trabajo* (1874); Azcárate *Ensayo sobre la historia del derecho de la propiedad* (1879-1883); Benito Gutiérrez *Influencia que en todos los tiempos ha ejercido el derecho de la propiedad, y fines importantes que hoy está llamado a cumplir* (1884); I. Pérez y Oliva *Transformación en el concepto del derecho de la propiedad en los últimos veinticinco años* (1889) o Altamira *Historia de la propiedad comunal* (1890). En el ámbito del Krausismo y el institucionalismo que se fue desarrollando en la primera etapa de la Restauración, se comienza a poner en tela de juicio los parámetros del derecho absoluto de la propiedad privada. La reforma política institucionalista no adquiere un sentido pleno si no es mediante una reforma social que pudiera compatibilizar la propiedad con una justa y equitativa distribución de los recursos disponibles. La defensa de la propiedad privada situaba al republicanismo en el ámbito del capitalismo, por lo que algunos pensadores como Azcárate, quien defendía en su obra “Resumen sobre un debate sobre el problema social” (1881) que la propiedad *era una condición necesaria para que el hombre pudiera cumplir su destino*, aunque al mismo tiempo rechazaba que fuera un bien de libre y absoluta disposición, por lo que su idea de que la propiedad tenía una función social le alejaba de las concepciones del primer liberalismo y los situaba ya en el terreno del nuevo liberalismo social. Al mismo tiempo se comienza a defender la idea de un Estado Interventor, por lo que dejaba de ser un mero protector de una clase determinada, para convertirse en un árbitro neutral de los intereses de todas las

---

<sup>2489</sup> BARO PAZOS, Juan, 1993, p.239.

<sup>2490</sup> MONEREO PEREZ, José Luis *Fundamentos doctrinales del Derecho Social en España*, Editorial Trotta, Madrid, 1999, pp.88-89.

clases sociales, por lo que dio lugar a la idea de la existencia de un interés general que superaba a los intereses particulares<sup>2491</sup>. En la llamada cuestión agraria también se pondrá en entredicho la llamada gran propiedad, articulada en las legislaciones sectoriales de la Restauración, siendo Joaquín Costa uno de los primeros intelectuales en el cambio de siglo que pondría en entredicho el carácter absoluto de este derecho. Al diagnosticar la situación social del campo, defendería un liberalismo social basado en la intervención del Estado.

La propia intervención estatal durante la segunda mitad del siglo XIX estuvo principalmente dedicada a suavizar los rigores de un régimen individualista, a la par que se mantenía una fe activa y profunda en sus principios esenciales basada en el individualismo. Un cambio significativo de la potestad administrativa sobre la propiedad privada de inmuebles lo encontramos ya en la promulgación de la Ley de Ensanches de 22 de diciembre de 1876, al imponer a los propietarios ribereños la obligación de ceder los terrenos para los viales, bajo amenaza de expropiación de la totalidad (art.15). Cerda decía en este sentido que si las calles y las plazas son un accesorio necesario (...) *es natural, es justo, que las costeen los dueños de las mismas casas*. En las posteriores Leyes de Ensanche de Madrid y Barcelona de 26 de julio de 1892, se facultaría a los ayuntamientos para expropiar la parcela edificable del propietario o los propietarios que se nieguen a hacer, en interés público o común. Evidentemente al mismo tiempo se establecería un justiprecio expropiatorio, que incluiría la ley de Expropiación Forzosa de 1879<sup>2492</sup>. En el proyecto de Código Rural del 27 de abril de 1876, formulado por el diputado Danvila, se observa la transformación que se estaba produciendo en el seno del concepto absoluto del derecho de la propiedad privada, al admitir las connotaciones limitadoras al bien común se estaban produciendo desde los inicios de la Restauración. En la Exposición de Motivos : *Al redactar, pues, un Código Rural, era necesario definir la naturaleza genuina de la propiedad que le sirve de objeto(...) no pudiendo negarse a los propietarios el derecho al suelo, a lo que produce, y la libertad de hacer en él todo cuanto le convenga, sin otra limitación que los derechos preexistentes. Esta libre facultad no tiene hoy más que dos restricciones, impuesta una por causa de salubridad pública, y la otra por razones de conveniencia del Estado*<sup>2493</sup>. En su artículo II se establecía que el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo y encima de ella. Puede usarlo y hacer en él todas las obras, plantaciones y excavaciones y por los medios que le convengan, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación especial de minas y en el Código de aguas, sin perjuicio de terceros. No cabe duda que sería la promulgación de la ley de expropiación forzosa por causa de utilidad pública de 10 de enero de 1879 la que va a abrir un nuevo

<sup>2491</sup> SUAREZ CORTINA, Manuel El republicanismo institucionalista en la Restauración, en DUARTE, Angel, GABRIEL, Pere El Republicanismo Español, *Ayer*, 39, 2000, pp.73-75.

<sup>2492</sup> PARADA, Ramón, 1999, p.8.

<sup>2493</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Apéndice al Núm.14, de 8 de marzo de 1878, p.20.

escenario en la praxis política y al mismo tiempo jurídico sobre el carácter absoluto del derecho de la propiedad privada, al significar el triunfo de la primacía del interés general sobre los puramente particulares, que ya en su artículo 1º quedaba fundamentada por la idea de la existencia de una *utilidad pública*, aunque limitada al mismo tiempo con el debido respeto del propietario, principios que habían sido ya recogido desde el primer constitucionalismo revolucionario francés, y plasmado en la propia constitución en su artículo 10. En el artículo 2 se precisaba la definición de obras de utilidad pública, entendiendo por éstas *las que tuvieran por objeto directo proporcionar al Estado, a una o más provincias, a uno o más pueblos, cualesquiera usos o mejoras que cedan en bien general, ya sean ejecutadas por cuenta del Estado, de las provincias o de los pueblos, ya por Compañías o Empresas particulares debidamente autorizadas*. Los requisitos para realizar una expropiación pública serían muy precisos, intentado por todos los medios no dañar los intereses particulares, por lo que se precisaba una declaración formal de utilidad pública (art.3.1), exigiendo que su ejecución exigiese indispensablemente el todo o parte del inmueble del que se pretenda expropiar (art.3.2), establecer un justiprecio de lo que se hubiera de enajenar o ceder (art.3.3), y el correspondiente pago del precio que representa la indemnización de lo que forzosamente se enajenase o cediese (art.3.4). En caso de que no se cumpliera dichos requisitos formales todo individuo que fuese privado de su propiedad podría utilizar los interdictos de retener y recobrar para que los Jueces amparasen y en su caso reintegrasen en la posesión al indebidamente expropiado (art.4)<sup>2494</sup>. El respeto de la propiedad privada quedaba a su vez amparado por el propio procedimiento de declaración, al considerarse como objeto de una ley cuando en todo o en parte haya de ser costeada con fondos del Estado, ocupando sin concurrir estas circunstancias lo exija su importancia a juicio del Gobierno (art.10). En el Real decreto de 27 de marzo de 1884 se establecía en su único artículo la ocupación de un terreno particular perteneciente a D. Jaime Rivatallada con motivo de las obras de variación y mejora del camino vecinal que iba desde San Cugat a Vallvidrera, en función al artículo 19 de la ley de 10 de enero de 1879<sup>2495</sup>. Como ya nos referiremos la promulgación de la ley de expropiación forzosa de 1879 tendría una crucial repercusión en la tutela del Patrimonio Monumental.

## **2.2. Una modernización del sistema administrativo del Patrimonio Monumental en la España de Alfonso XII.**

Uno de los pilares básico en toda intervención estatal se encuentra la creación de una organización administrativa que vele los intereses generales,

---

<sup>2494</sup> Colección Legislativa, 1º semestre de 1879, Tomo p.53.

<sup>2495</sup> Artículo único. Se confirma la resolución del Gobierno de la provincia de Barcelona, fecha de 31 de enero último, publicada en el Boletín oficial de 2 de febrero siguiente, declarando sea necesaria la ocupación de un terreno de propiedad de D. Jaime Rivatallada para las obras de variación y mejora del camino vecinal que va desde San Cugat a Vallvidrera y Sarriá. Gaceta de Madrid, Año CCXXIII, Núm.89. Tomo I, p.809.

que en el caso de la tutela del Patrimonio Monumental podemos afirmar que durante el reinado de Alfonso XII se delimitó una verdadera modernización del sistema administrativo de la tutela del Patrimonio Monumental, aunque con resultados muy limitados, con la potenciación que se le darían a las Comisiones Provinciales de Monumentos, el incremento del papel que jugaría las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia y la Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades.

**2.2.1. La potestad administrativa de las Comisiones de Monumentos en la tutela pública del Patrimonio Monumental: La Real orden de 30 de diciembre de 1881, la Real orden de 8 de enero de 1882 se derogaría la del 11 de junio de 1867 y la Real orden de 24 de abril de 1883 por el que se establece que los Museos provinciales sean tutelados por las Comisiones Provinciales de Monumentos**

El organismo tutelar por antonomasia del Patrimonio Monumental desde los inicios del periodo liberal había sido la Comisión de Monumentos, prolongando en esta etapa su papel de concienciar a las instituciones públicas y privada del respeto de los bienes de interés histórico y artístico, por lo que seguiría enviando un amplio número de circulares, como el **de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Oviedo del 20 de junio de 1878**, verdadera radiografía del panorama desolador de la pérdida patrimonial que asolaba a un amplio número de provincias españolas, como podemos comprobar en su lectura: *La conservación de los antiguos monumentos que atestiguan el brillo y la prosperidad del arte en épocas anteriores o recuerdan inmarcesibles glorias de la patria, es timbre de honor para los pueblos que la procuran, así como es una ignominia toda devastación o deterioro de esas preciosas reliquias de las generaciones pasadas. La piedad y magnificencia de Reyes, Prelados, Corporaciones y Magnates legaron una riqueza artística, suntuaria y literaria que es objeto de admiración y envidia de inteligentes extranjeros; más de algún tiempo a esta parte, la ignorancia o la falta de todo sentimiento artístico va destruyendo o despreciando tan valiosa herencia, que poco a poco nos arrebatan astutos y codiciosos especuladores, y transportan a extraños países, donde es objeto de general admiración, lo que aquí pasó como desapercibido, al mismo tiempo que se alentaba de las fatales restauraciones que se estaban realizando sin técnica científica, y de las ventas fraudulentas que se iban incrementando entre los particulares extranjeros, para lo que se aconsejaba su adquisición por las propias instituciones públicas: Escaso o ninguno es el provecho de los que venden antigüedades a los hábiles especuladores que explotan y se burlan de la ignorancia o del poco conocimiento por el vendedor. Ciertamente es que en ocasiones son los objetos de metales preciosos y que, en este caso, no puede ser fácil el espléndido regalo a las Corporaciones provinciales; más aun procede entonces poner la venta en conocimiento de las mismas, y ver si las Comisiones de Monumentos, en nombre de la Diputación Provincial, adquiere dicho objetos, o si, no teniendo recursos para tanto, procura su adquisición por el Museo arqueológico nacional en representación del Gobierno. De esta manera cesarán los habilidosos comisionados extranjeros, que en número considerable recorren las provincias y, poco a poco, van trasladando a las Galerías de poderosos aficionados o a los Museos de sus naciones respectivas, y por*



*ínfimo precio, los más preciosos restos de nuestra riqueza antigua, suntuaria y litúrgica. Y esto es vergonzoso para España.*

Ante estas circunstancias, los gobiernos de la Restauración intentan respaldar el papel institucional de las Comisiones Provinciales de Monumentos para lo que se promulga la **Real orden de 30 de diciembre de 1881** reformando en los términos que se expresa en los artículos 1º y 21 del reglamento, especialmente en el ámbito de la restauración de las obras públicas, que tuviesen un interés histórico y artístico. Serían los informes dirigidos por las Reales Academias las que insistirían a reformar los artículos 1º y 21 del reglamento de las Comisiones provinciales de Monumentos, *inspiradas en el laudable propósito de impedir los daños que puedan experimentar por abandono e ignorancia las obras de interés histórico y artístico, que deben ser protegidas y respetadas en consonancia con las leyes que en todos tiempos las ampararon eficazmente*, por lo que se consideraba que todas las obras de carácter público que se ejecutasen, ya por los Arzobispos, Prelados, Cabildos o por los Magistrados y Ayuntamientos, bien se sufraguen con fondos del Estado o con provinciales o municipales, debían ser intervenidas por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o por sus delegadas las Comisiones provinciales de Monumentos, para lo que debían someter a examen *los proyectos de las restauraciones o modificaciones que se propongan hacer en los edificios públicos*, como se había dispuesto en el artículo 21 del reglamento de 24 de noviembre de 1865 y la Real orden aclaratoria de 4 de febrero de 1867. Sin embargo, se inducía *una cierta ambigüedad en el texto de dicha Real orden*, especialmente en el artículo 21 del Reglamento, que había relegado el papel de las Comisiones de Monumentos en el caso de suspensión de las obras cuyos proyectos no se hubieran sometido a la sanción de la Academia, *dando lugar a que se lleven a cabo sin la debida autorización, siendo luego tardío el remedio, y frustrándose el objeto saludable de la ley*, por lo que establecía que fuera reformado el artículo 21 del reglamento del 24 de noviembre de 1865, por el que las Comisiones provinciales de Monumentos usarían la iniciativa respecto de los Gobernadores, tanto para reclamar contra toda obra que se proyecte en los edificios públicos sin el examen y censura previa de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuando ésta no delegue en dicha censura, la cual será siempre obligatoria, ya se trate de hacer restauraciones o modificaciones, ya de revocarlos o de realizar en ellos construcciones nuevas, sean o no complementarias de las antiguas, y sean o no obras de arte accesorias; y cualquiera que sea finalmente el carácter civil o religioso de los edificios en que hayan de ejecutarse y el uso a que estén destinados. Las Comisiones ordenarán la suspensión de semejantes obras no autorizadas hasta que recaiga sobre el asunto resolución definitiva (art.1º). Se revisaría a su vez la composición de las propias Comisiones de Monumentos, por la que serían sustituidas la designación de los cinco correspondientes más antiguos de cada Academia, por los que cada Academia designase, incluso con la potestad de que las propias Academias pudieran *reorganizar estas Comisiones siempre que lo estimen*

*oportuno* (art.2º). Con la promulgación de la **Real orden de 8 de enero de 1882** se derogaría la del 11 de junio de 1867, por la que se dispondría que se cumpliese en toda sus partes el reglamento de las comisiones provinciales de Monumentos históricos y artísticos de 24 de noviembre de 1865, por lo que nuevamente quedando a su cargo los Museos Provinciales de Bellas Artes. Unos meses después se dispondría por la **Real orden de 24 de abril de 1883** que los Museos Provinciales de Bellas Artes continuasen bajo la dirección y custodia de las respectivas Comisiones provinciales de monumentos allí donde no existan las Academias, y al cuidado de éstas, y con la intervención de dos individuos de las Comisiones de Monumentos, los establecidos en las provincias donde dichas Academias funciones; pero cuidando que los individuos que se designen por dichas Comisiones para esta intervención allí donde haya número para ello, deberán no pertenecer a la Academia provincial, y turnar por anualidades en el desempeño de este cargo en unión con los individuo de la Academia respectiva.

### **2.2.2. La intensificación del papel de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes.**

Con la llegada de la Restauración se intensificaría el papel de las Academias en el ámbito de la protección patrimonial, probablemente por la labor de Cánovas del Castillo, que llegaría a ser Director de la Real Academia de la Historia entre 1882 y 1897, al modificar la redacción del artículo 1 del Reglamento de 1865 con la inclusión del siguiente párrafo: *Las Academias podrán reorganizar estas Comisiones, siempre que lo estimen oportuno*, por lo que Maier apunta que el triunfo del academicismo era pleno. Las Comisiones de Antigüedades de la Academia de la Historia tuvieron un papel primordial desde 1878 como fue la elaboración de los expedientes de declaración de Monumentos Nacionales, aunque no hay constancia de que esta labor se hiciera por alguna disposición normativa. Maier recalca que con esta medida de carácter preventivo *lo que se pretendía que el monumento declarado quedase exento de las leyes desamortizadoras, fruto sin duda de la experiencia anteriormente vivida. De esta forma el monumento quedaba bajo la tutela del Estado (primero del Ministerio de Fomento y después del de Instrucción Pública y Bellas Artes), encargándose de su custodia e inspección las Comisiones Provinciales de Monumentos. La iniciativa para proceder a su declaración partía a instancia, por lo general, de autoridades municipales, Comisiones de Monumentos o propietarios del edificio, al Ministerio de Fomento, el cual solicita informe de las Reales Academias de la Historia y de las Bellas Artes de San Fernando*<sup>2496</sup>, encargando la primera un informe a la Comisión de Antigüedades, la cual nombraría a algunos de sus miembros para que realizase esta labor. La mayor parte de los informes

<sup>2496</sup> MAIER, J. 2003, p.48.

evacuados comenzarían a ser publicados en el Boletín de la Real Academia de la Historia desde el año 1877<sup>2497</sup>.

Al mismo tiempo, las Academias jugaron un papel primordial para que se promulgase una ley de antigüedades, hasta ahora inexistente en España. Así la Academia de Bellas Artes de San Fernando propondría a la Academia de la Historia, el 13 de junio de 1876, el nombramiento de una Comisión Mixta *de individuos de uno y otra que, reuniendo todos aquellos datos, y teniendo a la vista las disposiciones contenidas acerca de este asunto en la legislación vigente, proceda a un estudio definitivo de un proyecto de ley que haya de someterse en su día a la aprobación de las Cortes*. No obstante, no sería hasta la Real Orden de diciembre de 1883, siete años después de tal iniciativa, cuando el Gobierno mandara crear una Comisión para que elaborara un Proyecto de Ley de Conservación de Antigüedades Españolas, teniendo un plazo de tres meses para su presentación desde que llegase al Ministerio de Fomento. La Ley no llegaría hasta comienzos de los primeros años, pero esta mera frustración no supuso un obstáculo en la labor de la Academia de la Historia, designándose a la Comisión de las Antigüedades como permanente y la Comisión Mixta, así como la aprobación interna de la reforma del Reglamento de la Academia, aprobada en la Junta del 10 de febrero de 1899. En su artículo 3º se especificaba que *La Academia contribuirá, por cuantos medios estén a su alcance, a la conservación y estudio de los monumentos nacionales cuya inspección les está confiada por las leyes*. En el desempeño de estas funciones, la Academia sería auxiliada por las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos<sup>2498</sup>. Sin embargo, el panorama era desolador, ya que la mayoría de ellas habían empezado a languidecerse, debido a incrementarse los males que le había caracterizado desde su origen: falta de preparación académica de sus componentes, escaso respaldo económico o la escasa potestad ejecutiva en sus decisiones. En muchos casos, la muerte de alguno de sus miembros, que habían simbolizado el alma mater de la organización, significaba prácticamente su desaparición, o se quedaban muchas vacantes sin cubrir. De esta manera hacia 1875 había dejado de existir la Comisión de Guadalajara o la de Santander, desde 1876 a 1884.

### **2.2.3. El papel tutelar de la Junta Facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades.**

Con la promulgación de la Real orden de quedaba disuelta la Junta consultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos (art.1º), reorganizándose con el de Junta facultativa de Bibliotecas, Archivos y Museos de Antigüedades (art.2º). El nuevo organismo estaría formado por el Director General de Instrucción Pública como Presidente; el Jefe del Cuerpo, Vicepresidente; los Jefes Especiales de las tres secciones; un Oficial de cada una de las mismas;

---

<sup>2497</sup> FERNANDEZ GUERRA, A. "De la Comisión de Antigüedades", *Boletín de la Real Academia de la Historia*, I, 1879, pp.218-222.

<sup>2498</sup> MAIER, J. 2003, p.49.

tres individuos de libre elección del Gobierno, designados entre personas de reconocida competencia en el ramo, y un Secretario con voz y voto, que será el Oficial del Ministerio de Fomento á cuyo cargo esté el Negociado de Bibliotecas, Archivos y Museos. Los nombramientos de Vocales de la Junta recaerán necesariamente en individuos que tuviera su residencia en Madrid (art.3º). Las atribuciones de la Junta serían evacuar las consultas que el Gobierno le pidiera (art.4.1); Proponer el establecimiento de las Bibliotecas, Archivos y Museos que debían pertenecer al Cuerpo (art.4.2); Redactar los programas para los premios que se establecieran (art.4.3); Proponer los reglamentos generales del Cuerpo, los especiales de los establecimientos, y las instrucciones para los trabajos facultativos (art.4.4); Proponer de manera más conveniente de establecer en Madrid un Indice general de documentos, libros y objetos que se custodien en las Bibliotecas, Archivos y Museos arqueológicos que el Estado sostiene y fomenta (art.4.5); Elevar en terna las propuestas para el ingreso y ascenso por concurso en el Cuerpo (art.4.6) y proponer el incremento de las colecciones de las Bibliotecas, Archivos y Museos (art.4.7).

No se debe obviar en el camino de la institucionalización administrativa del Patrimonio Documental la promulgación del **Real decreto de 25 de marzo de 1881** aprobando el reglamento orgánico del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y establecimientos que del mismo dependiesen. **En la Exposición de Motivos se** *Hace veinticinco años era poco satisfactorio el estado de estos establecimientos en nuestro país. Con raras excepciones, se hallaban las Bibliotecas Públicas abandonadas, cerrados los Archivos, y por crear los seis Museos Arqueológicos que en la actualidad existen. En 1865 emprendió el Gobierno la reforma de estos males, con acertadas medidas, dignas siempre de elogio, que no tardaron en producir favorables resultados. Fundó la Escuela Superior de Diplomática, dotada de las enseñanzas indispensables para los empleados del Cuerpo; organizó el personal, y nombró la Junta consultiva.* Una de las aportaciones más significativas del Reglamento lo constituiría la clasificación y el régimen jurídico de los Archivos, Bibliotecas y Museos pertenecientes al Estado, que estaría marcada por una clara centralización. De esta manera los Archivos Históricos, las Bibliotecas Públicas y los Museos Arqueológicos, que ya existían y los que en un futuro se fundaran, estarían bajo la dependencia de la Dirección General de Instrucción Pública, y a cargo del cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (art.1º). Una permenorizada clasificación de los Establecimientos Públicos de carácter cultural intentaría dar una respuesta institucional a los problemas que conllevaban su conservación. Las Bibliotecas públicas se dividirían en cuatro clases: siendo consideradas de primera, la Nacional y las que poseían y poseyeran en lo sucesivo más de 100.000 volúmenes, entre impresos y manuscritos; de segunda, las que, no llegando a este número, excedieran de 30.000; de tercera, las que pasaren de 10000: y de cuarta, las que pasaren de 5000. Las que no completaran este número estarían a cargo de un Profesor del establecimiento en

el que radiquen o de que dependan (art.2º). Los Archivos y Museos se dividirían en tres clases: Los Archivos de primera clase, donde se incluirían el Histórico Nacional, el Central de Alcalá de Henares, el de Simancas, y todos los demás que en adelante dependieran de la Dirección General de Instrucción Pública, y contuvieran documentos relativos a la generalidad de la Nación; de segunda, el de la Corona de Aragón, establecido en Barcelona; el de Valencia, el de Galicia, sito en la Coruña; el de Palma de Mallorca, y cualquier otro que en lo sucesivo se crease con documentos de interés para la historia de los antiguos Reinos en que estuvo dividida la Península; y de tercera, el Histórico de Toledo, los universitarios de Madrid y Salamanca, y los que se formaren con documentos relativos a una localidad o institución determinada (art.3º). Se considerarían a su vez Museos de primera clase, el arqueológico nacional; de segunda, el Museo de Reproducciones Artísticas; y de tercera, los de Tarragona, Barcelona, Granada, Sevilla, Valladolid y los que en las demás provincias se organizaran en lo sucesivo (art.4º). Las Bibliotecas Nacional y del Ministerio de Fomento, el depósito de libros de Instrucción Pública y de Bibliotecas Populares, los Archivos Histórico Nacional y de Reproducciones Artísticas, dependerían inmediatamente de la Dirección general de Instrucción Pública (art.5º). Los demás establecimientos que no estuviesen comprendidos en el párrafo anterior estarían bajo la autoridad de los Rectores del distrito universitario en que radiquen, en lo que a la parte administrativa y a su régimen interior se refiere. Los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos que se fundaran posteriormente estarían bajo la dependencia del Ministerio de Fomento, por lo que serían clasificados según su caudal respectivo, en virtud del oportuno expediente, en que habría de oírse el dictamen de la Junta facultativa del ramo (art.6º). Al mismo se designaría el organigrama institucional de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, que estaría formada por el Director de Instrucción Pública que se le otorgaría el cargo de Presidente, el Jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que le correspondería la Vicepresidencia a los que se unirían el Director de la Escuela de Diplomática, y cuando sea Vocal por otro concepto, uno de los Profesores de la misma, los Jefes de Sección que estuvieren adscritos a establecimiento sitos en esta Corte; y en caso de residir algunos de ellos fuera, tendría que ser sustituido por el Jefe de la Sección más antiguo, que tenga su destino en Madrid, un individuo de número de la Real Academia de la Historia, tres individuos de libre elección del Gobierno, designados entre personas de reconocida competencia en el ramo, un Secretario que lo será el general del Cuerpo y de la Escuela de Diplomática (art.7º). Unos meses después sería promulgado el **Real decreto de 19 de junio de 1885**, aprobando el Reglamento de cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y establecimientos que del mismo dependen, con arreglo a las bases que establece el Real decreto de 12 de octubre de 1884.



### 2.3. Un Proyecto de ley del Patrimonio Monumental elaborado por la Comisión de Monumentos de Sevilla, redactado por Demetrio de los Ríos en 1876.

La Comisión de Monumentos de Sevilla trabajó no solamente en sus esfuerzos de restauración y conservación, objetivo primordial de estas instituciones, sino al mismo tiempo desde una perspectiva legal, por lo que proyectó su trabajo en un doble sentido, en la elaboración de unas leyes que protegiera el patrimonio, haciendo hincapié en las lagunas que existían en la entonces legislación sobre la materia y en dar a conocer las leyes existentes a las personas e instituciones implicados a tal efecto. El objetivo central de la Ley haría hincapié precisamente la propiedad de los bienes arqueológicos descubiertos. Sería redactado el Proyecto de Ley por el vicepresidente de la Comisión por D. Demetrio de los Ríos. De esta manera a partir de 1874, se comenzaría la labor con el envío de circulares al resto de las Comisiones, como la enviada por la de Sevilla el 6 de julio de 1874. Al abordar los problemas vitales en que aparecía inmerso una posible regulación de excavaciones se subrayaba la idea de la limitación que suponía el derecho absoluto del derecho de la propiedad privada: *Tiempo es ya de pensar y de que se promulgue una ley de Monumentos históricos y artísticos en las que se fijen las condiciones indispensables que han de tener estos para ser considerados tales; las formalidades a que se ha de sujetar esta declaración; las inmunidades y preeminencias legítimas y racionales que deben disfrutar para ser respetados por todo el mundo y el procedimiento que debe emplearse en cada caso según el Monumento pertenezca al Estado, la Provincia, el Municipio u otras Corporaciones de carácter público, fundándose la teoría armónica entre el individuo y la sociedad para recabar en beneficio de esta y sin perjuicio de nadie la salvación de infinitos Monumentos de propiedad particular que muchas veces compiten con los públicos y aun superan en importancia arqueológica y artística.* En febrero de 1875 Demetrio de los Ríos terminaba la redacción de la Ley de Antigüedades<sup>2499</sup>. El 7 de mayo de 1876 sería enviado un **Oficio de traslado del Gobernador Civil de Sevilla al Ministro de Fomento** en el que se solicitaba fuese considerado el proyecto de ley que había formado la Comisión de Monumentos de Sevilla sobre la propiedad de antigüedades, al mismo tiempo que se denunciaba las continuas intervenciones clandestinas en Itálica, así como del incremento de la venta de objetos de arte y arqueología de España. En la misma se aludía a los problemas que tenían con el propio vecindario, al ser propietario de la mayor parte de los terrenos que ocupaba el antiguo perímetro urbano, lo que impedía la prolongación de los trabajos realizadas en ellos: *Muchos y grandes son los tesoros arqueológicos y de monumentos históricos que posee España, siendo esta provincia de mi mando una de las que más riqueza encierra en tal sentido y entre estas riquezas la inmensa mayoría se encuentran en los terrenos que ocupan las ruinas de Itálica por cuya salvación y conservación para el Estado y para la ciencia. Sino por la lucha continua que se viene sosteniendo con el vecindario de la villa de Santiponce enclavada precisamente en los*

<sup>2499</sup> El texto aparece publicado en Ganau, 1998, pp.111-112.

*terrenos en que más preciosidades. De ahí la idea de elaborar un Proyecto de Ley, como el que había presentado la Comisión Provincial de Sevilla a las Reales Academias, donde se fijara principalmente el carácter legal y de propiedad de las antigüedades que en gran número atesora España y que han de considerarse como preciosos fundamentos para nuestra historia. La libre disposición de los propietarios sobre los bienes descubiertos en el caso de Itálica avivaba la necesidad de promulgar una ley de antigüedades que regulasen las excavaciones: Sabido es de todos la importancia de las ruinas de Itálica, pero no todos saben la constante lucha que tienen que sostener esta Comisión para conservar lo descubierto, y más todavía para el día en que pueda establecer un plan general de excavaciones en el recinto de la ciudad. Todos los días hay tentativas de construcciones por los vecinos de la villa de Santiponce en terrenos que corresponden a las ruinas; todos los días se descubren mosaicos, y objetos antiguos, en terrenos que hoy son de propiedad particular. En el primer caso, tenemos que estar de continua vigilancia, en el segundo se aconseja a los propietarios para que no se acabe de perder lo que se descubre. Mas todo el celo de la Comisión no es bastante a evitar el mal, se necesita de una ley. Incluso se hacía hincapié en las constantes muestras de mercado fraudulento que se había convertido en una práctica habitual en el ámbito nacional: Otra de las cosas que debe llamar la atención y que no es un mal exclusivo de esta localidad, consiste en este espíritu mercantil que se ha desarrollado en España respecto a los objetos de arte y de arqueología (...) porque por desgracia no tiene el noble fin de coleccionar para nuestra patria, sino el vender al mejor precio, que por lo general lo ofrecen los extranjeros. Llamamos muy particularmente la atención de esa Real Academia acerca de este punto en la inteligencia de que si no se acuerda con un pronto y eficaz remedio, dentro de muy pocos años habremos perdidos para siempre nuestros tesoros. La iniciativa presentada por la Comisión Provincial de Sevilla sería acogida por la Real Academia de San Fernando, que a su vez propondría a la de la Historia el nombramiento de una Comisión Mixta de individuos de una y otra que, reuniendo todo aquellos datos, y teniendo a la vista las disposiciones contenidas acerca de este asunto en la legislación vigente, proceda a un estudio definitivo de un proyecto de ley que haya de someterse en su día a la aprobación de las Cortes (Oficio de Eugenio de la Cámara al Secretario de la Real Academia de la Historia. Madrid, 13 de junio de 1876).*

El 5 de mayo de 1876 Demetrio de los Ríos enviaría un oficio al Director de la Real Academia de la Historia alentando sobre el deterioro que se estaba produciendo en Itálica, especialmente por los continuos expolios que se estaban produciendo en estos años, solicitando que se tuviese en cuenta el proyecto de ley que había sido redactado por la Comisión, especialmente la cuestión de la propiedad de los bienes arqueológicos: *Estos males pudieron ser evitados si llegara a ser ley el proyecto formado por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de esta provincia y que ha remitido a la Academia de San Fernando y sobre la cual me permito llamar la ilustrada atención de V.E. por si se digna hacer que se adopte ese a la disposición de carácter general y legislativa que V.E. considere oportuno y que venga a dictar unas reglas que tan necesarias son para fijar el carácter legal y de propiedad de esos tesoros nacionales. Lo que traslado a*

*V.S. para su conocimiento. Lo que tengo el honor de transcribir a V.E. manifestándole que las Comisiones de Monumentos han conocido por experiencia la necesidad de la formación de una ley en la que se fije principalmente el carácter legal y de propiedad de las antigüedades que en tan gran número atesora España y que han de considerarse preciosos fundamentos para nuestra Historia. Con el fin de facilitar este propósito, la Comisión de Sevilla tuvo la honra de dirigir a las Reales Academias un proyecto de Ley de Monumentos que podrá servir de base para que haya de ser definitiva. El amor a nuestras glorias, tantas veces demostrada por esa ilustre Corporación, es la más poderosa garantía de que por su parte hará todo lo posible para que se forme la Ley, pero esta Comisión, cumpliendo con los deberes de su instituto, no puede menos de manifestar lo urgente que son para esta provincia disposiciones legales de carácter general. Sin embargo, nunca llegaría a promulgarse ninguno de las disposiciones que había incluido Demetrio de los Ríos en su Proyecto. A pesar de ello, el hecho probablemente no paso aislado, ya que como apunta José Ignacio Lara nos parece bastante significativa la determinación que demuestra la Comisión sevillana (y su mentor, Demetrio de los Ríos) en la búsqueda de una mayor eficacia en el desempeño de sus funciones, amén del movimiento que despertó a nivel nacional y de las medidas que como consecuencia de ello se tomaron<sup>2500</sup>. Durante el Gobierno del Partido Liberal, se mandaría crear mediante Real Orden de 6 de diciembre de 1883 una Comisión para proponer una Ley de Conservación de Antigüedades Españolas, la cual debía presentar las bases en el término de tres meses a contar desde su instalación al Ministro de Fomento. En ella se sintetizaría las disposiciones generales a que habían de someterse las Diputaciones provinciales, los Ayuntamientos y las Comisiones de Monumentos. En 1884 se recuerda que mientras se redacte dicha ley se observen las Leyes, Reales Decretos y Reales órdenes vigentes sobre la conservación de Monumentos Históricos y Artísticos.*

#### **2.4. Derecho de la propiedad eclesiástica e intervención administrativa en la tutela del Patrimonio Monumental durante el reinado de Alfonso XII.**

El Patrimonio Eclesiástico Monumental va a seguir siendo objeto de una tutela especial del Estado, donde se va a seguir distinguiendo aquellos bienes que habían sido desamortizados de aquellos que siguiendo en propiedad de la Iglesia podrían ser tutelados por el propio Estado siempre que su interés histórico y artístico así lo requiriera. El Decreto de 23 de enero de 1875 disponiendo que se devuelvan a los Cabildos y Corporaciones Religiosas a quienes pertenezcan los Archivos, Bibliotecas, gabinetes y demás objetos de Ciencia, Arte o Literatura de que el Estado se hubiese incautado en virtud del

<sup>2500</sup> LARA ESCOZ, José Ignacio “La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Sevilla en el siglo XIX. Una perspectiva arqueológica” en DEAMOS, Belén; BELTRAN, José *Las instituciones en el origen y desarrollo de la Arqueología en España*, Spal, Monografías Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, p.87.

de 1º de enero de 1869, por el que al mismo tiempo la Iglesia volvía a recuperar un amplio número de bienes de interés histórico y artístico que había perdido con los avatares revolucionario. No obstante, se apreciaría una nueva lectura en el espíritu del decreto, ya que se reconocía al mismo tiempo la potestad de la Iglesia y la utilidad social que estos bienes podían representar para la sociedad española, independientemente de su valor espiritual. Al mismo tiempo las disposiciones normativas que se fueron dando a lo largo de este periodo en torno a la restauración de los bienes inmuebles del Patrimonio Monumental Eclesiástico, generándose un verdadero debate de gestión institucional entre el propio Estado y la Iglesia con respecto a quien ostentaría la potestad sobre la restauración de estos bienes. A pesar de que la Iglesia tendría la propiedad de los bienes inmuebles, el Estado comenzaría a limitar su uso público.

#### **2.4.1. El debate doctrinal en torno a la propiedad de los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico: Las tesis de Turbino sobre el derecho de la Iglesia a la adquisición de bienes.**

El académico e historiador del arte Turbino escribe un interesante artículo en la revista *La Ilustración Española y Americana* en referente al problema vital de la propiedad monumental eclesiástica, defendiendo claramente la potestad que le correspondía al Estado sobre la Iglesia, que aunque siendo propiedad de la Iglesia, su derecho de disposición y uso en aquellos bienes de interés histórico y artístico estarían limitados. El artículo comenzaría con una crítica sobre el uso que en muchas parroquias y casas religiosas se estaban haciendo de ella: *Queremos, si llamar la atención del clero alto y bajo, de los fieles y de las corporaciones encargadas de proteger y conservar los monumentos públicos, así como señalar el error en que muchos se encuentran imbuidos, de la mejor buena fe, cuando piensa que el cabildo de una Catedral, el cura arcipreste de una parroquia o las monjas de un convento están autorizados para enajenar, ceder o permutar los objetos confiados a su custodia, ora sirvan directamente para los servicios religiosos, ya existan a títulos de depósitos, en los monasterios y santuarios, subrayando que los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico no eran de dominio particular, sino que en cierta medida eran meros depositarios, por lo que quedaban limitados en el uso que se le daban: Procede tan grave equivocación de ignorar que lo que hay en los edificios a que nos referimos, no constituyen una propiedad individual. Claramente determina el Derecho eclesiástico el género de autoridad que al clero corresponde sobre los templos y las cosas en ellos conservadas. Mero depositario.*

El artículo proseguía con un elogio a las que había realizado el obispo Urquinanona, obispo de Barcelona, que había promulgado el 27 de febrero una circular eclesiástica con referencia a los objetos de arte cristiano, y otra de 21 de agosto en la que recordaba como la Iglesia, en su legislación disciplinaria, había señalado al clero, *la senda que debe recorrer en cuanto atañe a sus obligaciones relativamente a los santuarios y a las cosas que le pertenecen, no*

*faltan prelados celosos que recuerdan a sus hermanos la obligación estrecha en que están de conservar y respetar los unos y los otros, siguiendo en esta línea las que anteriormente se habían promulgados con fechas 17 de enero de 1860, 16 de diciembre de 1861, 25 de agosto de 1864 y 22 de julio de 1868, por la que se prohibiría la permuta, venta, cesión, enajenación de cualquier utensilio, ornamento, por viejo y deteriorado que sea o esté; de toda caja, de todo manuscrito, libro, lápida, cuadro, retablo, moneda, banco, y de todo objeto que se recomiende por su mérito artístico o por el solo sabor de antigüedad. Asimismo dispone que no se proceda a restaurar ninguno de esos mismos objetos sin que antes se pida el permiso necesario, mediante informe de una Comisión de tres señores canónigos, nombrados al efecto por S.I. Se habrá de consultar también para lo referente a la construcción y restauración de altares y retablos, y para lo propio de la indumentaria litúrgica. Al mismo tiempo sería elogiado por Turbinolas medidas que con rara oportunidad reproduce el Sr. Urquinaona, y es lástima que no se extienda a prohibir, en absoluto, toda obra de reparación o reforma en los templos, tanto en lo interior como en la parte externa, obligando a las Juntas de Fábrica, abades, arciprestes, y en resumen, a los custodios de aquellos a impetrar el necesario permiso para ejecutarlas, a lo que se uniría la redacción de Memorias y la creación de Museos Diocesanos donde habrían de reunirse todos aquellos objetos que, procediendo de los templos, no tuvieran en ellos un destino especial. Turbino terminaría su artículo insistiendo en que las obras de arte de carácter religiosa no podía ser vendidas a ningún particular y sin una clara autorización eclesiástica: Las juntas de fábrica, las cofradías, los curas párrocos, decía textualmente señor Turinaz, en 1876, no pueden, como se ha dicho, vender objetos de arte de la cosa que éste a su cargo, porque no son propietarios de ellos, y si únicamente usufructuarios. Una venta de esta clase de objetos preciosos, raros o de interés arqueológico, serían declaradas nula, si a ella faltase el consentimiento del tutor, que es el diocesano<sup>2501</sup>.*

#### **2.4.2. La devolución de los bienes eclesiásticos y su impronta en la tutela del Patrimonio Monumental.**

La política institucional de la Restauración estuvo marcada por el intento de restablecer con la Iglesia los vínculos perdidos en el periodo revolucionario anterior, que había supuesto la política de expropiación de los bienes eclesiásticos. Con este objetivo, se dispuso el **Real Decreto del 9 de marzo de 1875** en el que se dispondría que los Jefes Económicos pusieran a disposición de los Arzobispos y Obispos las propiedades del clero que habían sido exceptuados en la permutación acordada con la Santa Sede en 1860. En la Exposición de Motivos se marcaba ya una distancia con la política institucional de los gobiernos anteriores que había supuesto: *Cuando en 1860 se concordó con la Santa Sede la permutación de los bienes del clero, solo se exceptuaron de ella los que por su naturaleza y condiciones no podían entrar en el comercio ni satisfacer ninguna necesidad económica; quedando por consiguiente y desde entonces realizada*

<sup>2501</sup>Turbino, “Los monumentos del arte cristiano y la circular del Sr. Obispo de Barcelona” en *la Ilustración española y americana* Suplemento al núm. XXXVI, 30 de septiembre de 1879, pp.202-206.



*por completa la desamortización de toda la propiedad inmueble. Con posteridad y por diferentes Autoridades se adoptaron diversas disposiciones, en cuya virtud muchos de los bienes no comprendido en la permutación volvieron al poder del Estado, habiéndose demolidos unos, destinándose a servicios públicos y subsistiendo los demás en poder del Estado, puntualizando que se quería remediar la pérdida patrimonial que había supuesto dichas medidas desamortizadoras, especialmente de aquellos bienes de interés histórico y artístico: El Ministerio-Regencia desea remediar en lo posible los efectos de aquellas disposiciones, porque de no hacerlo, monumentos que a su carácter piadoso agregan el mérito histórico y artístico desaparecerán como tantos otros en desdoro de la Nación.* De esta manera se establecería que los Jefes Económicos pondrían a disposición de los Arzobispos y Obispos aquellas propiedades del clero que, exceptuadas de la permutación concordada con la Santa Sede en 1860, estuviesen en poder del Estado por consecuencia de disposiciones posteriores y no se hubieran aplicados a servicios públicos (art.1º). En caso de que se hubiese emprendido la demolición de algunos de estos inmuebles, los Jefes Económicos dispondrían la suspensión de los trabajos, dando cuenta al Ministro de Hacienda (art.2º). El Ministerio de Hacienda sería el encargado de adaptar las disposiciones pertenecientes para la devolución de los bienes (art.3º).

A raíz de la política de devolución de bienes eclesiásticos se promulgaría el **Decreto de 23 de enero de 1875** disponiendo que se devuelvan a los Cabildos y Corporaciones Religiosas a quienes pertenezcan los Archivos, Bibliotecas, gabinetes y demás objetos de Ciencia, Arte o Literatura de que el Estado se hubiese incautado en virtud del de 1º de enero de 1869, siendo Antonio Cánovas del Castillo su promotor. El principio fundamental que va a imperar esta disposición sería el de la potestad pública sobre unos bienes que aunque se reconociera la propiedad de la Iglesia, el interés general imperaba sobre ello, un matiz que abre en cierta manera la fórmula de relación que se va a ir delimitándose a partir de este momento. La Exposición Preliminar abordaba en sus primeros párrafos cuales habían sido los resultados de la incautación de los bienes religiosos en el periodo revolucionario de 1868, especialmente en la consecuente pérdida del Patrimonio Monumental que había conllevado, y por consiguiente no pudiendo cumplir el uso público que iban a tener estos bienes, que en cierta manera había sido el objetivo de estas medidas de incautación: *El decreto de 1º de enero de 1869 dispuso que el Estado se incautase de todos los Archivos, Bibliotecas y Gabinetes y demás colecciones de objetos de Ciencia, Arte o Literatura, que bajo cualquier concepto estuviesen a cargo de las Catedrales, Cabildos, monasterios u órdenes militares, exceptuando solamente lo más indispensable para el culto y para las Bibliotecas de los Seminarios. Que esta medida fue dictada bajo el influjo de azarosas circunstancias políticas, lo demuestran, a más de erróneos procedimientos que sería inoportuno enumerar, los mismos términos del citado decreto, en que no solo se acumulan injustificados supuestos y datos aventurados, sino que se sientan doctrinas de exagerada centralización y principios contrarios a la justicia. De aquí dinamizó el hecho*

*significativo de que el decreto mencionado tuviese muy incompleto cumplimiento en cuanto a su fin principal, que era el de poner al servicio del público riquezas bibliográficas y preciosidades artísticas que sin razón se suponían secuestradas. En casi todas las provincias limitóse la ejecución a cerrar y sellar los Archivos, que han permanecido desde entonces faltos de la necesaria custodia, experimentando los perjuicios consiguientes, sin utilidad alguna para los que a ellos hubieran atendido durante ese periodo. De esta situación solamente se salvaba siguiendo el sentido literal del Real decreto las de Toledo y Madrid, en aquella formando con la copiosa biblioteca del Cabildo catedral y con los Códices y documentos de la misma y de las Ordenes militares una Biblioteca pública y un Archivo Histórico, que por fuerza habían de ser importantes, siendo mucho como lo eran los elementos que entraron en su composición, y en esta aumentando el ya rico fondo del archivo histórico nacional con los documentos de la casa conventual de la Orden de Santiago en Ucles; pero no habiéndose aumentado en proporción la dotación ni el personal de dicho establecimiento, y siendo por otra parte el local en que radica exiguo e insuficiente las enunciadas colecciones se hallan por necesidad mal conservadas y expuestas a inevitables deterioro. Ante estas circunstancias se daba por hecho de que tenían que ser devueltos los objetos eclesiásticos, fundamentándose en el decreto del 9 expedido por el Ministerio de Hacienda que ordenaba la devolución al Clero de las propiedades exceptuadas de la permuta concordada con la Santa Sede que existan actualmente en poder del Estado, puntualizando que dicha devolución tendría como consecuencia lógica que á las Corporaciones a cuyo favor se expidió, se devuelvan los títulos de propiedad y los documentos que acreditan su personalidad, así como la riqueza artística y literaria adquirida por ellas en el transcurso de siglos, en no poco casos bien conservada, y accesible a la investigación particular, como el Gobierno espera que seguirá siéndolo cada vez más en adelante. Sin embargo se dejaba un matiz, y es que aunque la Iglesia conservara su propiedad dejará abierta la posibilidad que los investigadores privados pudiera acceder a su estudio, subrayando que había sido una práctica tradicional de la propia Iglesia: El Gobierno reconoce, como no puede menos, el dominio de los prelados o de las Corporaciones que los disfrutaban, y por lo tanto se abstendrá cuidadosamente de disponer de ellos sin la voluntad expresa de sus legítimos propietarios; pero recordando que la Iglesia nunca guardó avara sus riquezas de aquel género cuando se trataba de contribuir con ellas á la pública instrucción, confía en que tampoco rehusará ahora su consentimiento a que tan preciosos objetos se ostenten debidamente ordenados y custodiados, allí donde puedan ser de mayor utilidad para el adelanto y florecimiento de las ciencias o de las artes.*

Para la aplicación de estas disposiciones se establecería un preciso procedimiento administrativo por lo que los Gobernadores civiles de las provincias devolvieran a los Cabildos y a las Corporaciones religiosas á quienes pertenecían, los Archivos, Bibliotecas, gabinetes y demás objetos de Ciencia, Arte o Literatura de que el Estado se hubiere incautado en virtud del decreto de 1º de enero de 1869 (art.1º); pudiendo delegar el Gobernador siempre que sea posible á uno o más individuos del Cuerpo de Archiveros-

Bibliotecarios, los cuales, con presencia de los catálogos, índices o relaciones que existieren, harán la entrega a la persona delegada por el Prelado ó corporación a quien corresponda hacerla, y levantará un acta de ella, que se remitirá al Gobierno (art.2º). A su vez el Gobierno, por instancia del Gobernador, pediría autorización al Prelado de la Corporación para que, una vez informado cedieran aquellos objetos que tuviesen un señalado interés histórico, literario o artístico y que pudiera ser conservado en los Museos, Archivos o Bibliotecas (art.3º). Los Archivos de las Ordenanzas militares permanecerían en el lugar y forma en que se encontraban hasta que, reorganizada la jurisdicción maestral de acuerdo con la Santa Sede, se determine la Autoridad o corporación á cuyo cargo ha de ponerse (art.4º). En caso de existir alguna incidencia, se resolvería por el Gobierno, oyendo a la Dirección de Instrucción Pública (art.5º).

Unos días después se publicaría el **Orden del 29 de enero de 1875**, por la que se establecería un procedimiento administrativo de devolución de los bienes eclesiásticos. De esta manera los Gobernadores Civiles, de acuerdo con los Prelados ó Autoridades eclesiásticas á quienes corresponda designarán día para verificar la devolución (art.1º). Para ello se constituirán en el local ó depósito de incautación los Gobernadores, acompañados del delegado del Prelado ó del de las corporaciones á quienes pertenecieran los objetos, del Jefe de la Sección de Fomento, individuo o individuos del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios que residieran en la localidad, ó en su defecto por una persona de reconocida competencia (art.2º). Una vez abierto y reconocido el local y hecho constar su estado, los Gobernadores podrían delegar sus funciones en el Jefe de la Sección de Fomento (art.3º). En el caso que las localidades en donde debía verificarse la devolución estuvieran en puntos distantes de la residencia del Gobernador, podía delegar igualmente sus funciones para el acto de reconocimiento y apertura en el Jefe ú otro empleado de la Sección de Fomento, ó en las respectivas autoridades locales (art.4º). El acto de la devolución de los objetos se verificará, en cuanto sea posible, con sujeción a los mismos trámites con que se hubiere verificado la incautación (art.5º). Los Gobernadores ó sus delegados en el acto de la entrega, una vez oído al representante del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, se encargarían de formar relación detallada de los objetos que reunieran las circunstancias indicadas en el artículo 3º del decreto de 23 de enero, remitiéndolas con urgencia ál Ministerio de Gobernación (art.6º). Una vez terminada la devolución, los Gobernadores enviarían un informe al Ministerio de todas las diligencias ocurridas de la devolución (art.7º). La Dirección General de Instrucción Pública resolvería todas las dudas, dificultades, o incidencias que hubiera dado lugar el cumplimiento de estas disposiciones y la ejecución del decreto (art.9º). Como última medida se disolvería por **Orden del Ministerio-Regencia del 29 de enero de 1875** la Comisión nombrada para informar sobre la importancia, valor científico y destino de las colecciones y objetos del Clero,

que se mandan devolver á los Cabildos y Corporaciones Religiosas, que a su vez habían sido nombrada por orden del 5 de enero de 1875.

**2.4.3. Un intento de regulación de la restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico: Las controversias entre las atribuciones de las Comisiones de Monumentos y las Juntas Diocesanas de Reparación de templos.**

La nueva situación política nacida de la Monarquía Constitucional diseñada por Cánovas del Castillo de posición conciliadora con la Iglesia, al mismo tiempo que de despojo institucional en algunos campos de la vida política, propio de un sistema liberal, va a tener su reflejo en la acción administrativa sobre el ámbito de la restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico. Una vez conseguida la secularización de las obras de restauración y su clara definición como construcción civil, el Ministerio de Fomento no quiso volver a la confusa situación anterior de interferencia eclesiástica en el control de las obras. A pesar de este espíritu secularizador por parte de las autoridades civiles, el Gobierno, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y el Vaticano, no quiso obviar totalmente a la propia Iglesia, por lo que en el organismo administrativo encargado de las obras de restauración que se irían a realizar en estos años, la Junta Inspector, la Presidencia sería dada al Obispo, relegando al Gobernador Civil a un simple presidente honorario, quitándole el papel primordial que se le había dado en la etapa republicana. Se trataba, como apunta Ignacio González-Vara de una solución en la línea de la hábil política conciliadora que el nuevo Estado deseaba mantener con la Iglesia. Las medidas secularizadoras adoptadas durante el periodo revolucionario no se prolongarían por el Gobierno de la Restauración, de tal manera que el problema de la naturaleza jurídica de los bienes artísticos de la Iglesia permaneció sin solución durante todo el siglo XIX y primera década del XX.

**2.4.3.1. Un intento de regulación de la Restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico: El Real decreto de 13 de agosto de 1876 y la Instrucción de 1877.**

Como apunta José Manuel Rodríguez Domingo, *la preocupación del Gobierno por atender la cada vez más acuciantes y cuantiosas necesidades de reparación de iglesias parroquiales quedaría reflejada en una serie de decretos, instrucciones y circulares, acerca de la obligatoriedad que tenían las Juntas Diocesanas de elevar a la consideración del Ministerio de Gracia y Justicia expedientes correctamente informados y documentados. La principal dificultad estribaba en el conocimiento exacto del estado en que se hallaban aquellas obras cuya ejecución se habían aprobado, las cantidades libradas y los trabajos iniciados. Multitud de expedientes se iban amontonando en las oficinas del Ministerio procedentes de otros tantos pueblos de España, buena parte de ellos con defecto de forma, a lo que se sumaba la afluencia de correspondencia por parte de los Prelados reclamando la urgencia en el libramiento de los fondos, cuando no la remisión de*

*planos, memorias e informes*<sup>2502</sup>. La promulgación del **Real decreto de 13 de agosto de 1876 y su Instrucción de 1877 para el cumplimiento del Real Decreto del 13 de agosto de 1876**, sobre reparación extraordinaria de templos y edificios eclesiásticos supuso un intento de regularizar la cuestión de la tutela pública sobre la Restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico, especialmente las que se referían especialmente a la asignación presupuestaria que había establecido el art.36 del Concordato de 1851 y el 13 del Convenio adicional de 1859 señalado para obras extraordinarias de reparación de los templos y demás edificios eclesiásticos y la propia institucionalización tutelar, actualizando a su vez la ley de 1861. En la Exposición de Motivos del Real decreto de 13 de agosto de 1876 ya se enunciaba los problemas de financiación en el ámbito de la restauración monumental, a raíz de lo previsto en los artículos 36 del Concordato de 1851 y 13 del Convenio Adicional de 1859: *La situación poco satisfactoria del Tesoro ha obligado á dotar con extremada parsimonia en el presente años servicios que, á no mediar esta causa, tendrían seguramente en el presupuesto de gastos créditos más cuantiosos. La administración de justicia, la beneficencia, la instrucción pública, el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, las vías de comunicación, en suma, todo cuanto se ordena á favorecer los progresos morales o materiales de la Nación, aparece en la actual Ley de Hacienda, si no desatendido, con asignación insuficiente. Este espíritu de rigurosa economía, impuesto por las circunstancias, no podía dejar de alcanzar también a las partidas destinadas á las obligaciones eclesiásticas; y en efecto, la que en observancia de lo prescrito en el art.36 del Concordato de 1851 y el 13 del Convenio adicional de 1859 se ha señalado para obras extraordinarias de reparación de los templos y demás edificios eclesiásticos, es en verdad muy inferior á lo que demanda el lamentable atraso en que por las vicisitudes de los tiempos se encuentra este servicio. Más por lo mismo que con la escasa cantidad votada por las Cortes para este objeto no cabe satisfacer todas las reclamaciones de fondos que hacen los Prelados, los Cabildos, los Párrocos y los Superiores de los Seminarios y de los Institutos Religiosos, es indispensable dictar reglas para que el crédito legislativo se emplee de la mejor manera posible, acudiendo con preferencia á lo que más apremie y aplazando para época más próspera lo que con menos inconvenientes pueda demorarse; y este es el objeto que se ha propuesto el Ministro que suscribe al redactar el decreto que tiene la honra de someter a la aprobación de V.M.* En la clasificación que va a establecer sobre la ejecución de obras se establece ya la doble vía de protección que se va a establecer a la hora de tutelar el Patrimonio Eclesiástico Monumental, superponiéndose al espíritu de la legislación revolucionaria, aunque no variando con respecto a la ley de 1861, quedando la primera bajo la autoridad de los Ordinarios, no teniendo el Estado otra intervención que la de policía urbana. En virtud del artículo 1º se dispondría que *Las obras de construcción y reparación de los templos catedrales, colegiales y parroquiales, palacios episcopales, seminarios conciliares é iglesias, y casas de religiosos y religiosas, se dividen en*

---

<sup>2502</sup> RODRIGUEZ DOMINGO, José Manuel “La Junta de Reparación de Templos de la diócesis de Guadix-Baza (1845-1904)”, *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, N.31, Granada, 2000, p.172.



*ordinarias y extraordinarias. Serían obras ordinarias las que cada año hay necesidad de hacer para tener los edificios en buen estado de conservación, y pueden costearse con las dotaciones consignadas para gastos del culto y sostenimiento de los Seminarios conciliares en los artículos 34 y 35 del concordato de 1851, con la parte de la renta de las Sillas episcopales vacantes, que conforme al art.37 del mismo Convenio debe emplearse en reparar los palacios de los Prelados, y con las limosnas de los fieles y Obras Extraordinarias las que no pudiendo hacerse con los medios indicados, deben sin embargo ser costeadas por el Estado en cumplimiento del art.36 del Concordato y del 13 del Convenio adicional de 1859. Las obras que se hagan sin subvención del Estado se considerarán como ordinarias para los efectos de este decreto.* En base a ello, la modalidad de la ejecución de la obra dependería de la clasificación que se le había dado al inmueble eclesiástico, por lo que las obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos se harían con sujeción á las disposiciones generales para la ejecución de servicios públicos y a las contenidas en el presente decreto(art.3º) y las obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos se contratarán en pública subasta (art.4º). No obstante, se podía hacer por Administración o por contrata sin subasta: 1º Las obras cuyo presupuesto no excediera de 1.500 pesetas; 2º Aquellas para cuya ejecución no presentaran licitadores en dos subastas consecutivas y 3º Las de restauración artística que, oídas la Junta diocesana, la Comisión Provincial de Monumentos y la Real Academia de San Fernando, se dispusiera que se hicieran por Administración (art. 4º ), a lo que se añadía que el que una obra se hiciera por Administración no excluía la celebración de subastas parciales para la adquisición de materiales o para cualquier otro servicio que pudieran realizarse sin inconveniente por medio de licitación pública (art.4º).

Sería creado un nuevo organigrama institucional que se encargase de la conservación y reparación de los Monumentos Eclesiásticos, con la denominación de Junta diocesana de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos, que tendría como finalidad *auxiliar al Gobierno en la instrucción de los expedientes de obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y demás edificios destinados al servicio de la Iglesia, y para velar por su buena ejecución* (art.5º),habiendo una en cada capital de cada diócesis. En su composición ya encontramos insertada la preeminencia de la Iglesia sobre el Estado en la tutela del Patrimonio Eclesiástico Monumental al estar presidido por el Prelado y en Sede vacante o impedida, del Gobernador de la diócesis, a los que se unirían como miembros el Deán, un Canónigo, elegido por el Cabildo; un Párroco con residencia en la población, designado por el Prelado; el Promotor fiscal, y donde hubiera más de uno, del más antiguo; el Síndico del Ayuntamiento, y un individuo nombrado por la Comisión provincial de Monumentos (art.5º). Ya en la Exposición de Motivos de la propia ley de 1876 se inserta el nuevo marco tutelar eclesiástico frente a los intereses públicos secularizados: *Teniendo muy en cuenta los decretos de Vuestra Augusta Madre de 19 de setiembre de 1851 y 12 de junio de 1857, y muy principalmente el 4 de octubre de*

*1861, conservando a los Prelados en la organización de las Juntas diocesanas el eficaz influjo que de justicia les corresponde ejercer en estas corporaciones, y manteniendo para la ejecución de las obras de alguna importancia la garantía de la subasta pública se ha procurado completar el pensamiento que inspiró aquellas Reales disposiciones.* Las nuevas Juntas contarían con una asignación financiera, por lo que a la de Toledo se le facultaba con un importe anual de 1.500 pesetas; á las demás metropolitanas con 1.250, y a las sufragáneas la de 1.000 (art.6º). Si la obra se debía hacer fuera de la capital, se crearía, luego que se apruebe la contrata de construcción, y si hubiere de hacerse por Administración cuando se autorice el comienzo de los trabajos, una Junta especial, dependiente de la diocesana (art.7º). Nuevamente en su organigrama prevalecería el control eclesiástico de la misma, al estar presidido si la obra ha de hacerse en su Colegiata, el abad; si es una parroquia, el Párroco; si en un Palacio episcopal, la persona que el Prelado designe; si en un Seminario, el Rector; si en una iglesia o casa de Religiosos; el Superior; y si en iglesia o casa de religiosas, el Capellán; siendo Vocales 1 Alcalde, el Síndico del Ayuntamiento y los dos vecinos de la población que hayan contribuido con mayor limosna para la obra, y en caso de que no los hubiese, dos vecinos, nombrados, uno por el Presidente de la Junta y otro por el Alcalde (art.7º).

El arquitecto diocesano se convierte en uno de los pilares de la nueva disposición, como así plantea la misma Exposición de Motivos: *Con esta mira se crean los Arquitectos diocesanos, poniendo como condición á los que acepten este cargo, la renuncia de una parte muy considerable de los honorarios á que tendrían derecho con arreglo a tarifa, con lo cual se obtendrá notable economía en los gastos de la dirección facultativa; se ordena que cada trimestre se remitan a este Ministerio relaciones de las obras de reparación solicitadas en todas las diócesis, para dar con presencia de este dato la inversión más útil á la cantidad de que pueda disponerse; y se prescribe la forma de satisfacer el precio de los trabajos, disponiéndose que se ejecuten por contrata nada se pague sin que conste previamente tenerlo devengado el empresario, y en que los que se hagan por Administración no se expidan libramientos a favor de personas que no hayan prestado fianza suficiente para responder de los fondos que entren en su poder.* Para practicar los reconocimientos facultativos de los edificios, levantar planos y formar los proyectos de las obras, se nombraría por el Ministerio de Gracia y Justicia el número de Arquitectos diocesanos y de suplentes que se juzgue necesario, atendiendo a la extensión y especiales circunstancias de cada diócesis. Estos facultativos deberán residir en la circunscripción donde hayan de prestar su servicio (art.8º). Los Arquitectos diocesanos se comunicarían con el Ministro de Gracia y Justicia por conducto de los Presidentes de las Juntas de reparación de templos y edificios eclesiásticos, aunque en casos graves y urgentes podrían dirigirse por sí al Ministerio, pasando al propio tiempo copia de la comunicación al expresado Presidente (art.10).

La potestad del poder eclesiástico sobre la restauración de edificios quedarían aparentemente mermada con esta disposición, ya que aunque en la Exposición de Motivos se precisaba que se conservaba a los Prelados *en la organización de las Juntas diocesanas el eficaz influjo que de justicia les corresponde ejercer en estas corporaciones*, fundamentado en los Reales decretos de 19 de septiembre de 1851 y 12 de junio de 1857, y muy principalmente el 4 de octubre de 1861, en el artículo 11º se precisaba que no se podrían ejecutar obra alguna extraordinaria en los templos ni en los edificios destinados al servicio de la iglesia sin previa autorización Real. Al mismo tiempo se articulaba un preciso procedimiento en la que se establecía como debía ser incoado por los Prelados los expedientes de restauración de edificios religiosos, bien en los casos de urgente realización, cuya ejecución no se puede atender con el presupuesto ordinario (art.12), para lo que el Prelado pedirá informe al Alcalde de la localidad y a cualquiera otras personas que juzgue conveniente acerca del estado del edificio y de si es necesaria y urgente la obra (art.13), y una vez instruido el expediente, lo pasaría a la Junta diocesana para que acuerde lo que proceda sobre la necesidad y urgencias de las obras que se reclama (art.13). Las Juntas diocesanas formarán y elevarán trimestralmente al Ministerio de Gracia y Justicia los expedientes de obras extraordinarias sobre que hayan tomado acuerdo favorable, numerándolos por el orden de preferencia que a su juicio deba darse a la ejecución (art.14). La nueva regulación de la restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico sería recogida por las sucesivas circulares que fueron mandados a las Instituciones Eclesiásticas con el fin de que fueran cumplidas sus disposiciones, como es el caso de la **Circular de 13 de diciembre de 1880** enviada a los Arzobispos y Obispos, estableciendo las reglas que se han de tener presentes para la construcción y reparación de templos, conventos y demás edificios eclesiásticos.

#### **2.4.3.2. El debate jurídico sobre la restauración de la Catedral de León: El conflicto entre la potestad pública y eclesiástica en torno a la propiedad eclesiástica monumental.**

La restauración de la Catedral de León se convierte en el paradigma de restauración inmobiliaria bajo los auspicios del Estado Isabelino<sup>2503</sup>. Sin

<sup>2503</sup> Sobre la restauración de la Catedral de León, cabe mencionar CRUZADA VILLAMIL, Gregorio, "Restauración de la Catedral de León", *El Arte en España*, Madrid, 1863, Nº XIX, pp.29-30, 1864, nº XX, pp.33-34; FERNANDEZ CASANOVA, Adolfo, "Las obras de la Catedral de León", *Revista del Archivo Nacional Español*, Madrid, 31 de octubre de 1878, Año V, Nº 10. NAVASCUES PALACIOS, Pedro, *Arquitectura del siglo XIX: las fachadas de la Catedral de León*. Barcelona, Estudios A-Pro Arte, , 1977; *La catedral de León: de la verdad histórica al espejismo erudito en Medievalismo y Neomedievalismo en la arquitectura española*, Ávila, 1990; HERNANDO, Javier, *Arquitectura de España, 1770-1900*, Madrid, Cátedra, 1989. Un ejemplo claro de respeto de la originalidad del edificio, especialmente en su estructura constructiva, obviando cualquier añadido que perdiera su estadio primitivo lo podemos encontrar en las reflexiones de Lampérez que todavía en 1901 haría sobre la restauración de la Catedral de León: Es patrimonio de nuestra época esa erudición enciclopedista que, no contenta con saber los hechos y fenómenos presentes, aspira á

embargo, su restauración ha entrado a formar parte al mismo tiempo del debate jurídico-institucional que nació a raíz de los intentos de secularización de las obras, que llevaría a un acalorado enfrentamiento entre el entonces obispo de León, y el arquitecto designado para las obras, Juan Madrazo. Juan de Madrazo sería partidario de continuar con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Republicano y solicitaría en varias ocasiones la total secularización de las obras de restauración, lo que supondría que el Obispo dejara la Presidencia de la Junta Inspectora. Al contrario, el Obispado y el Cabildo Catedralicio defendían la potestad eclesiástica, en cuanto a que la restauración de la Catedral de León era una empresa esencialmente religiosa, por lo que las autoridades eclesiásticas tenían que tener una decisiva participación en la gestión, control y decisión de la marcha de las obras. Juan de Madrazo defendería la concepción moderna de tratar a la catedral más como un monumento que como un edificio religioso: *la restauración que el Estado está llevando a efecto en la Catedral de León, por medio del Ministerio de Fomento, es una empresa puramente civil y laica; se está restaurando a la Catedral por razón de mérito y del valor de sus fábricas, no en virtud del uso a que está destinado el edificio*, por lo que en el plano administrativo, Madrazo se opondría radicalmente a la participación de las autoridades eclesiásticas en la Junta Inspectora: *La intervención del clero en una junta local de restauración artística, que sería completamente inútil y superflua, no tiene explicación racional*<sup>2504</sup>. Para argumentar sus opiniones respecto a la cuestión administrativa de las obras de restauración, comparó la situación con el ámbito francés, que en este momento habían creado un aparato institucional donde prevalecía la autoridad civil sobre la eclesiástica en aquellos bienes inmuebles eclesiásticos que poseyeran un interés histórico y artístico: *En Francia, se encuentran secularizadas hasta las obras diocesanas, ¿Porqué no han de estarlo también todas las que en España dependen de la Dirección de obras Públicas, están clasificados como construcciones civiles y forman un ramo importante de nuestra administración?*<sup>2505</sup>.

---

escudriñar el modo de sentir y de actuar de las generaciones pasadas. En ella tiene su origen el arte de las restauraciones, no practicado ni comprendido por nuestros abuelos: al modificar un monumento, aplicaban las formas y cánones de su época. El sistema, desde ciertos puntos de vista, es sensato y lógico, con tal que el sistema constructivo en que la obra se ejecute se inspire en los mismos principios que inspiraron la primitiva. Pero si, como es caso frecuente, sucede todo lo contrario, el método en cuestión da por resultado la ruina del edificio. Ejemplo palpable de ello es la Catedral de León (...). Lámperez resaltaría a su vez el prestigio que estaba adquiriendo desde la segunda mitad del siglo XIX la escuela de restauración de inmuebles histórico española: Otro resultado plausible de estos trabajos ha sido el de crear escuela. Con ellos y por ellos se han iniciados nuestros arquitectos en la ciencia teórica práctica de las restauraciones: en ellos se han inspirado multitud de estudios, con lo que el arte nacional extendió sus horizontes; y con ello ha demostrado la arquitectura española contemporánea ser digna hermana de la que, en las demás naciones de Europa, rehiciera los monumentos más preciados de la Edad Media. LAMPEREZ, Vicente “La Catedral de León y su restauración”, *La Ilustración Española y Americana*, Nº XXI, 8 de junio de 1901.

<sup>2504</sup> GONZALEZ-VERA IBAÑEZ, 1993, p.268; MADRAZO, Juan de Contestación, p.21.

<sup>2505</sup> GONZALEZ-VERA IBAÑEZ, 1993, p.268; MADRAZO, Juan de Contestación..., p.22.

En el fondo de esta controversia se encontraba una vez más la polémica en torno la naturaleza jurídica de los bienes eclesiásticos, en cuanto a ser considerados simples bienes de interés histórico y artísticos (tesis defendida por Juan de Madrazo) o bien de interés espiritual (tesis defendida por los sectores más conservadores de la Iglesia). El Cabildo Catedralicio combatiría la postura laicista de Juan de Madrazo con las tesis ya tradicionales de considerar el valor espiritual del bien eclesiástico monumental<sup>2506</sup>. Desde la Vindicación del Cabildo y las páginas del periódico local, La Crónica de León, se recalcaría la identidad espiritual de los bienes: *nosotros no comprendemos lo augusto de la razón en la estrecha capacidad a que la reducen sus teorías; porque nosotros, sin quitarle nada de lo que ella es naturalmente, la espaciamos por el anchísimo y hermoso horizonte de las ideas sobrenaturales*. Juan de Madrazo respondería al Cabildo de la Catedral de León con la invocación de las fuentes de donde él, como artista, tomaba su inspiración: Este busca su inspiración en la naturaleza, integrando la mayor suma posible la belleza relativa y finita, para acercarse lo más que se pueda a la belleza absoluta e infinita, que sienten sin comprenderla todos los pueblos y civilizaciones de la tierra. Madrazo además concebía la restauración del edificio medieval como una operación en primer lugar científica, de estudio y recuperación de las formas del pasado, en que la parte artística consistía en esa reconcentrada actividad encerrada en la interioridad de la conciencia individual y sus relaciones con el mundo natural, lejos de inspiraciones de carácter sobrenatural, ideas próximas a las tesis mantenidas en este momento por Gumersindo de Azcárate, de ahí que Madrazo defendía la necesidad de desligar el ejercicio de la religión con la restauración arquitectónica de un templo cristiano, por lo que llegaría a opinar que *es el colmo del absurdo pedir la profesión de una fe determinada para restaurar una Catedral*. En contraposición, para el Cabildo Catedralicio la restauración del templo mayor de la Diócesis suponía revitalizar los contenidos cristianos que expresaba la arquitectura de las Catedrales, dentro de los movimientos de renovación medievalista que se estaba proyectando no solamente en España, sino en muchos círculos neocatólicos europeos, como habían sido el caso de Chateaubriand y Victor Hugo en Francia y Ruskin y Pugin en Inglaterra<sup>2507</sup>. Al mismo tiempo Juan de Madrazo apostaría por una investigación racionalista del edificio que lo alejara de pretendidas cuestiones metafísicas que diluía la lectura constructiva del edificio medieval: *en la esfera de lo real y de lo positivo, cual es la esfera de las construcciones, la observación y el experimento sobre casos iguales o análogos en mas legítima y mejor fuentes que las disquisiciones metafísicas*. Un método por tanto que asentaba a la arquitectura como hecho físico y material, dotada de una lógica racional interna a su propio carácter arquitectónico, relegando a segundo plano, o incluso negaba, la importancia del

<sup>2506</sup> RIVERA, Javier *Historia de las restauraciones de la Catedral de León*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993, pp.246-256.

<sup>2507</sup> HERNANDO CARRASCO, Javier *Arquitectura en España 1770-1990, Los neomedievalismos como discurso religioso*, Madrid, 1989, pp.204-212.



ideal religioso o cualquier tipo de interpretación metafísica, como factores impulsores de la construcción.

Las discrepancias entre las posturas de Juan de Madrazo y del Obispo de León llevaría a intervenir al propio Ministerio de Fomento, especialmente en la cuestión de empleo de fondos, llevaría a ser destituido de su cargo, por Real Orden de 21 de octubre de 1879, lo que en cierta manera representaría un triunfo de las pretensiones eclesiásticas sobre el carácter laico que había impulsado la actitud de Madrazo<sup>2508</sup>. Lo que si es importante resaltar que el arquitecto destituido contaría ante todo con el apoyo de la Real Academia de San Fernando, que se contiene en el Informe de 8 de noviembre de 1879 como respuesta a la Real Orden de 21 de octubre de 1879, que volverían a remitir el 25 de noviembre. Su cese además provocaría un amplio debate parlamentario sobre la cuestión de la secularización de las obras de restauración, el día 6 de diciembre de 1879, por lo que el diputado liberal por la provincia de León y amigo personal de Juan de Madrazo, Fernando Merino Villarino, expresaba en estos términos la cuestión: *deseo saber si las obras de restauración en la Catedral de León están o no secularizadas*. La contestación del Ministro de Fomento, intentando quitar importancia al hecho, contestaría de manera confusa: como se trata de la restauración de una Catedral, tiene cierta intervención, más o menos directa, en esta obra la Junta de obras, a que pertenece el Sr. Obispo de la diócesis, aunque intentaría dejar claro que él era como Ministro de Fomento el máximo responsable del mismo, por encima de la autoridad religiosa. Fernando Merino, criticaría la situación, apuntando que los trabajos debían ser secularizados: *creo y afirmo, puesto que las obras se pagan por el Estado, que debiera ser la Junta o Comisión provincial de Monumentos la que ejerciera su intervención o el gobernador de la provincia como inmediato representante del Gobierno de S.M.*<sup>2509</sup>. Poco tiempo después, Juan Madrazo moría el 7 de marzo de 1880, siendo reconocido su prestigio como arquitecto por las autoridades académicas.

#### **2.4.3.3. Las controversias entre las atribuciones de las Comisiones de Monumentos y las Juntas Diocesanas de Reparación de templos: las dificultades de ejecución de los Reales Decretos de 13 de agosto de 1876 y 23 de abril de 1882 y el Reglamento de 1865.**

La labor de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos se vio limitada por las reticencias de las autoridades religiosas de que se entrometieran en el ámbito tutelar de la restauración monumental. De esta manera la Iglesia fundamentaba su derecho a la intervención de la restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico en los Reales Decretos de 13 de agosto de 1876 y 23 de abril de 1882 expedidos por el Ministerio de Gracia y

---

<sup>2508</sup> La crónica de los distintos enfrentamientos entre el Cabildo catedralicio y el arquitecto de la Catedral aparecen recogida en GONZALEZ-VERA IBAÑEZ, 1993, pp.276-282.

<sup>2509</sup> Diario de las Sesiones de las Cortes del Congreso de los Diputados. Sesión del sábado 6 de diciembre de 1879, n° 67, pp.1246-1247.

Justicia, por el cual había sido creado las Juntas Diocesanas de Reparación de templos, determinando asimismo sus atribuciones, mientras que las Comisiones de Monumentos apoyaban sus reivindicaciones en el Reglamento de las Comisiones de Monumentos de 24 de noviembre de 1865, que en cierta forma le atribuían dicha potestad. Una serie de disposiciones en cierta forma contradictorias iría atribuyendo una mayor tutela a las potestades eclesiásticas en el ámbito de la restauración. **En la Real Orden de 23 de abril de 1880** se dispondría que las Comisiones de Monumentos pudieran intervenir en la reparación de los templo. La disposición había tenido lugar a raíz de la consulta que el Vicepresidente de la Comisión de Monumentos de Sevilla había hecho al Vicepresidente del Gobierno en relación a las potestades que tenían atribuidas a la hora de tutelar la restauración de la iglesia de Santa Catalina de Sevilla. La disposición legal dejaba clara que las Comisiones de Monumentos quedaban excluidas entre sus atribuciones de tutelar el proceso de restauración de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico de dominio eclesiástico, fundamentándose en que *el real decreto de 13 de agosto de 1876 sobre la construcción y reparación de templos abiertos al culto excluye, por derogación expresa, todas las disposiciones que se opongan a las que en él se establecen, y en ninguna de éstas se concede facultad de vigilancia ni intervención en las obras de reparación de las construcciones, a que se refiere dicho decreto, a las Comisiones provinciales de monumentos de tal manera que el artículo 5º al disponer que se nombre para auxiliar al Gobierno en la instrucción de los expedientes de obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y demás edificios destinados al servicio de la Iglesia, una Junta diocesana que entienda en estos asuntos, designa entre otras personas de representación, a un individuo nombrado por la Comisión provincial de Monumentos, y claro es que ésta excluida in solidum de la participación que se atribuye, cuando solo se le concede a uno de sus individuos*. Se referiría sobre todo a aquellos templos que mantuvieran su funcionalidad espiritual, o sea siguiera teniendo culto, porque solamente se instaba a que su intervención se quedaría exclusivamente a aquellos donde y que se conserven y custodien por su mérito artístico, donde ya no se oficiaba ningún culto religioso.

En el **Informe de la Real Academia de la Historia de 22 de diciembre de 1881** sobre atribuciones que por la normativa vigente tiene la Comisión de Monumentos de Sevilla en la obra de la Catedral, nuevamente se plantearía la controversia entre las autoridades eclesiásticas y la propia Comisión de Monumentos de Sevilla. En dicho informe se daba constancia como el deán y Cabildo en **oficio de 28 de octubre de 1881**, dirigido a la referida comisión manifestaba su impedimento a la visita fundamentando *en defensa de su derecho toda injerencia oficios a que menoscabe las atribuciones de esta Corporación*, fundándose para ello en los *Reales Decreto de 13 de agosto de 1876 y 23 de abril de 1880 expedidos por el Ministro de Gracia y creando las juntas diversas de reparación de templos y determinando sus atribuciones estos preceptos están abierta contradicción con el reglamento de las Comisiones de Monumentos de 24 de noviembre de 1869, que en su parte esencial no hizo otra cosa más que aplicar*

*las disposiciones de las leyes vigentes en la materia que son entre otras las 4ª y 5ª del tit. 2º libro Iº y la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª del título 34, libro 7º de la Novísima Recopilación, por lo cual puede ponerse en duda la legalidad y eficacia de las citadas disposiciones de 76 y 80, pues aún prescindiendo de esta consideración es evidente que dichos Decretos y el Reglamento de 1869 para la Comisión de Monumentos debe someterse este asunto al examen y resolución del Consejo de Ministros que se dirima el verdadero conflicto que en la actualidad existe entre los de Gracia y Justicia y Fomento de que se den en el particular preceptos que eviten sucesos como el que se denuncia en el oficio dirigido por el Gobernador de Sevilla al Sr. Director de Instrucción Pública en noviembre del presente año, y que como en él se expresa sepan en adelante a qué atenerse las comisiones provinciales de Monumentos en el desempeño de los deberes que su reglamento les impone.* El informe del académico proseguiría apostando por la solución efectiva de las atribuciones que las Comisiones de Monumentos habían sido designadas en el Real decreto de 1865, por lo que defendía que se sostuviera las atribuciones que hoy tienen las comisiones de monumentos para evitar la destrucción de estos y lo que quizás por la ignorancia y el mal gusto con restauraciones que luego son ignorancias para nuestra patria, cuanto más vergonzoso cuanto que esas maltratadas restauraciones son el testimonio que se presenta a los ojos de los extranjeros que visitan a España de nuestra actual cultura y de nuestros adelantos artísticos, a lo que añadiría que mientras esto no tuviera lugar sería indispensable que los Señores Ministros de Gracia y Justicia y de Fomento sometieran el asunto de que se trata a la resolución del Gabinete modificando los decretos expedidos en cuanto sea menester para que guarde en vigor con atribuciones que a las Comisiones de Monumentos designa el reglamento de 1865. Unos meses después, la Real Academia de la Historia en minuta de oficio del 12 de enero de 1880 instaba a que el conflicto jurisdiccional entre las Comisiones de Monumentos y la Iglesia debía someterse al examen y resolución del Consejo de Ministros para que dirima el verdadero conflicto que en la actualidad existe entre las de Gracia y Justicia y Fomento, a fin de que se den en el particular preceptos que eviten sucesos como el que se denuncia en el oficio dirigido por el Gobernador de Sevilla a esa Dirección General, y para que, como en él se expresa, sepan en adelante a qué atenerse las comisiones provinciales de Monumentos en el desempeño de los deberes que sus Reglamentos les impone.

#### **2.4.4. La asignación de Presupuesto Público en la tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico.**

Uno de los puntos vitales en la nueva política de restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico fue la asignación de unas dotaciones económicas, que aparecían reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado, e incluso en algunos casos se concederían algunos créditos supletorios, como es el caso de la promulgación de la Ley de 27 de diciembre de 1878 concediendo un crédito supletorio de 100.000 pesetas a la Sección 3ª, capítulo 18, art. 1º, Reparación de templos, del presupuesto vigente para las obras de la catedral de Córdoba.

**2.4.5. El Informe de la Academia sobre el proceso de secularización del Patrimonio Eclesiástico Monumental: Un intento de promulgación de una ley de propiedad artística de los bienes eclesiásticos. La Real Orden Circular de 29 de octubre de 1879.**

La Real Academia de San Fernando acudió en varias ocasiones al Ministerio de Gracia y Justicia reclamando el control institucional y jurídico de los bienes monumentales eclesiásticos, cuya propiedad ostentaba la Iglesia. Sus propuestas realizadas durante la restauración borbónica, concretamente en 1879, no apoyarían las medidas secularizadoras del proceso revolucionario, al considerarlas de ser radical, sino que se orientaba a una ambigua limitación en el ejercicio de la propiedad de estos bienes por el clero y en la propuesta de fomento y desarrollo de la conciencia del valor artístico del patrimonio eclesiástico entre los religiosos para evitar su expoliación. La Real Academia de San Fernando dirigiría una serie de comunicados al Ministro de Gracia y Justicia alentando sobre la necesidad de promulgar una ley que definitivamente limitara el ejercicio de la propiedad de los bienes de interés históricos-artísticos, con la propuesta de fomentar y desarrollar la conciencia del valor artístico del patrimonio eclesiástico, para evitar su expoliación. La primera enviada se fecharía el 30 de enero de 1878, firmada por Pedro Madrazo, como secretario de la Academia, y una segunda el 14 de octubre de 1879, en la que se intentaba recordar a los Cabildos, que mientras no se estableciera en España una legislación especial sobre propiedad artística, debía atenerse a las limitaciones que los cánones de acuerdo con las leyes civiles ponen a la facultad de disponer de los objetos litúrgicos y al uso de aquella riqueza. La ley de propiedad artística de los bienes eclesiásticos deseada por la Real Academia de San Fernando no llegaría nunca a redactarse, por lo que continuaron los expolios continuos ante la falta de la protección jurídica debida. No obstante, por parte del Ministerio de Gracia y Justicia algunas circulares al respecto, como **la Real Orden Circular del 29 de octubre de 1879** dirigida a los Prelados y Gobernadores eclesiástico, aunque no tendría más fuerza que la de una mera orientación que invitaba a su incumplimiento, pues incluso el Ministro la caracterizaba como simple observación a fin de que los Cabildos, párrocos y encargados de las Iglesias conserven con especial esmero los objetos de arte y litúrgicos que contienen y estén prevenidos contra la acechanzas de los especuladores que pretenden apoderarse de ellos con engaño. De esta manera el cuidado de los bienes eclesiásticos quedaba en manos de la propia Iglesia, aunque en algunos casos, excepcionales, algún Prelado optó por realizar una amplia labor pastoral con el fin de poder proteger sus bienes, como fue el caso de Monseñor Urquinaona, Obispo de Barcelona. Al mismo tiempo, el Gobierno durante toda la etapa se limitó a recordar el deber del cumplimiento de la Real Orden del 10 de abril de 1866, donde se precisaba que el clero no podía disponer libremente de los objetos artísticos o arqueológicos que existiesen o fuesen descubiertos en sus iglesias sin previo conocimiento de

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o de las Comisiones Provinciales de Monumentos<sup>2510</sup>.

#### **2.4.6. La tutela pública sobre los bienes de interés histórico y artístico pertenecientes a los Patronatos Religiosos.**

La tutela pública sobre los bienes de interés histórico y artístico pertenecientes a los Patronatos Religiosos durante la Restauración inicia un verdadero debate sobre el régimen patrimonial de los bienes de su pertenencia, ya que un gran número de ellos habían sido depositados en Museos e incluso habían terminado en colecciones privadas, al mismo tiempo que comenzó a ponerse de relieve hasta qué punto el Estado podía intervenir en la tutela de los mismos. Conocemos la reclamación de algunos Patronos de Confesiones Religiosas de algunos bienes históricos y artísticos que habían sido depositados a raíz de las medidas desamortizadoras en los respectivos Museos Provinciales, con el fin de que les fueran devueltos a su ubicación original, como fue el caso de las llamadas pinturas del antiguo monasterio de Nuestra Señora de los Remedios del pueblo vallisoletano de Fuendalsaña. Como en la mayoría del origen de estas fundaciones, encontramos los auspicios de un personaje de relevancia en el ámbito local, que en este caso fue Don Alonso Pérez de Vivero, conde de Fuensaldaña, insertado en la Corte de Felipe IV, quien otorgó poderes a su madre, Doña María de Minchaca, para que otorgara una fundación en el convento de Nuestra señora de los remedios, del pueblo vallisoletano de Fuendalsaña, el 28 de marzo de 1651. La iglesia monástica se engalanó con tres magníficos lienzos con lo que el fundador había enriquecido el convento, enviándolos desde los Países Bajos. Se trata de las obras representadas por la Asunción de Marí, la Estigmatización de San Francisco y San Antonio de Pauda, de Thomas Willeboirts Bosschaert, anteriormente atribuidas a Rubens<sup>2511</sup>. Estas obras serían confiscadas en 1809 durante el reinado de José I, con la intención de formar parte del frustrado proyecto madrileño del Museo Josefino, y posteriormente en 1841, serían trasladadas definitivamente al Museo de Valladolid. Hacia 1878, estas pinturas serían reclamadas por el Marqués de Alcañices, en calidad de Patrono de la Fundación, originando una verdadera controversia con la Comisión Provincial de Monumentos y la propia Real Academia de San Fernando. La lectura del informe de la Real Academia de la Historia del 10 de noviembre de 1878 nos aclara la situación jurídica en que se encontraba estos cuadros y la reacción institucional sobre el destino de los mismos. El Informe comenzaría con una exposición de aclaración de dominio sobre los cuadros, basándose especialmente en los informes de la Comisión Provincial de Monumentos y la Oficina de Hacienda de la provincia, *donde debieron constar los expedientes o inventarios para la incautación y aplicación al Estado de los bienes que pertenecieron*

---

<sup>2510</sup> GONZALEZ-VARA IBÁÑEZ, Ignacio, pp.265-266.

<sup>2511</sup> CARMAN, Thomas “Willeboirts Bosschaert, pintor de Fuensaldaña”, *Archivo Español de Arte*, 1972, 45, p.178.



a las comunidades religiosas cuando fueron suprimidas. En el caso de la Oficina de Hacienda se exponía que *no se ha conseguido todavía la contestación del Gobierno Civil a la comunicación que por la presidencia de esta Academia se le dirigió con aquel objeto; y por consecuencia este informe no puede abarcar con toda la extensión y claridad necesarias los extremos indicados en la orden superior que le motiva*. Por su parte, la Comisión de Monumentos aportaría como prueba de dominio *un catálogo de los acuerdos de la Comisión científica creada en esta ciudad para la formación del Museo Provincial, cuyo catálogo corresponde al año de 1842, autorizada con la firma del Vicepresidente de aquella, en cuyo catálogo de 8 agosto del mismo año se dice: Traslación de los cuadros de Fuensaldaña al Museo (...) en el suplemento del Boletín Oficial de esta Provincia que corresponde al del 13 de octubre del mismo año 1842 al mismo tiempo que se daba cuenta del acto de la apertura del Museo se publicó una relación firmada por el Sr. Jefe Político de la provincia expresando que se hallaban en la sala o local*. Sin embargo, su defensa legal se fundamentaría en **la Real Orden de 1º de diciembre de 1846**, puntualizándose como en esta disposición legal se resolvió que pertenecían a la Nación todas las pinturas y demás objetos donados por los patronos a los conventos suprimidos, salvo el caso en que la escritura de donación contengan la clausula especial de reversión o reserva de propiedad; ya porque también el convento de monjas de Fuensaldaña no había sido materialmente suprimido por decreto de autoridad competente lo estaba de hecho y por la ley en razón a que durante muchos años no ha contado con el número de monjas necesario para constituir la comunidad; ya también porque los tres cuadros de Fuensaldaña no fuesen trasladados a este Museo por un acto de ocupación o recogida como los de otras comunidades, sino que tuvo lugar una verdadera permuta por otros objetos que en el Museo ya existían, a saber por dos altares y dos cuadros que se llevaron a Fuensaldaña y se colocaron en la iglesia del Convento para dejarlo como quedó decorosamente adornada, actos que se verificaron con intención de la Comunidad y consentimiento del Marqués.

Al mismo tiempo la propia Real Academia de la Historia subrayaría el carácter público de los cuadros basándose en la legislación pertinente que en este momento estaba en vigor, como por el hecho de que hasta este momento ninguno de los patronos había solicitado la propiedad de los mismos: *La Comisión obró con la prudencia posible, lo demuestra el hecho de la permuta solicitada consentida tanto por la comunidad de Fuensaldaña como por el patrono, entonces y por espacio de tantos años*. Las condiciones de conservación de los cuadros que brindaría su ubicación en un museo se convertiría en fundamento de traslación de propiedad: *trasladar a este Museo tres cuadros, contra cuya conservación existían dos elementos: uno la falta de seguridad cada día mayor en un pueblo de muy corto vecindario y en un convento cuya comunidad llegó a reducirse a solos dos religiosas (...) otro consistente en la deplorable condiciones de un local húmedo, mal ventilado, y el más propósito para la destrucción de las pinturas con la acción del tiempo (...)*. Al final del Informe se recalcaría cómo su conversión en bienes de utilidad pública y su posible traslado a un edificio religioso haría perder en cierta manera la importancia de estos bienes: *La Comisión de Monumentos primero y la Academia después han conservado y conservan en este Museo los renombrados cuadros de Fuensaldaña de modo que sirva como poderoso y*

*eficaz elemento de estudio para los aficionados a las Bellas Artes, y como objeto de legítima curiosidad y admiración para todas las personas instruidas. Profundo sería el vacío que dejase en este Museo la traslación de los cuadros a otro punto y no es posible ocultar el temor de que solo el intento de removerlos influyese en su inmediata destrucción.*

## **2.5. La ambigua categorización de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico como Monumento Nacional Histórico y Artístico y Monumento Nacional durante el periodo de Alfonso XII.**

Durante este periodo se consolida la declaración de Monumento Nacional como instrumento administrativo de la tutela pública del Patrimonio Monumental, incrementándose el número de bienes de interés histórico y artísticos protegidos, pero careciendo de una verdadera regulación jurídica que unificara tanto el procedimiento administrativo como el fundamento jurídico por el que eran seleccionados. Todos los bienes que fueron declarados durante este periodo van a ser bienes inmuebles, por lo que aquellos bienes muebles de interés histórico-artístico no serían reconocidos como tales. Al mismo tiempo la mayor parte de los bienes históricos-artísticos formarían parte del Patrimonio Arquitectónico, aunque empezarían a ser declarados bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico. Como podemos comprobar en la lista, el primer Monumento arqueológico declarado Nacional fueron las ruinas de Numancia por Real Orden de 25 de agosto de 1882. Posteriormente fueron declarados las murallas ciclópeas de Tarragona por Real Orden de 24 de marzo de 1884 y el acueducto de Segovia por Real Orden de 11 de octubre de 1884. Por Ley de 26 de agosto de 1896 es declarado Monumento Nacional el teatro romano de Sagunto. Antes de la Ley de 1911, también fueron declarados el acueducto de Ferreras de Tarragona por Real Orden de 3 de julio de 1906, el tramo de muralla de Sevilla comprendido en tres las puertas de Córdoba y la Macarena por Real Orden de 11 de enero de 1908. Al mismo tiempo serían declarados las ruinas de Itálica y Mérida por Real Orden de 13 de diciembre de 1912. La mayoría de los edificios serían religiosos, aunque su reconocimiento no vendría por su interés espiritual sino por su valor histórico y artístico. La primera declaración de monumento nacional se haría en 1878: la puerta del Sol, de Toledo: *S.M. el Rey conformándose con lo manifestado por la R.A. de Bellas Artes de S. Fernando y con lo propuesto por esta Dirección General, ha tenido a bien declarar monumento nacional, histórico y artístico el conocido con el nombre de Puerta de Sol en la ciudad de Toledo; disponiendo asimismo que se ponga bajo la inmediata inspección y vigilancia de la Comisión provincial del ramo*<sup>2512</sup>. En el caso de Andalucía se intensificaron el número de Declaraciones de Monumentos, como podemos apreciar en el estudio que realizaron Jesús Salas Álvarez y Jorge Maier Allende: Así entre 1845 y 1868, se declararían solamente dos, y entre 1869 y 1874, solamente uno, mientras que ya entre 1875 y 1910, se

---

<sup>2512</sup> CAL, Rosa “La recuperación de los monumentos históricos para acrecentar el turismo” *Historia y Comunicación Social*, 8. Madrid, 2003, pp.13-14.

incrementarían a treces. Los bienes de interés histórico y artístico declarados como Monumentos Nacionales en este periodo serían los siguientes:

- Real Orden de 4 de agosto de 1875, por el que se dispone sea exceptuada de la venta de Bienes Nacionales, por ser Monumento Histórico y Artístico y debe conservarse, la Iglesia de San Pedro de los Francos, en Calatayud, provincia de Zaragoza.
- Real Orden de 8 de febrero de 1876, por el que se dispone sea exceptuado de la venta de los Bienes Nacionales, como Monumento Histórico y Artístico digno de ser conservado, la Torre de los Pelaires, en Palma, provincia de Baleares. Confirmada por Real Orden de 3 de marzo de 1876, disponiendo que el referido edificio sea puesto bajo la custodia y vigilancia de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Baleares.
- Real Orden de 27 de junio de 1876, por el que se dispone sean exceptuado de la venta de Bienes Nacionales, como Monumento Histórico y Artístico, la Cartuja de Santa María del Pualar, Rascafría, en la provincia de Madrid.
- Real Orden del 3 de noviembre de 1876, por la que se exceptúa de Bienes Nacionales, como Monumento Nacional digno de conservarse, la torre (resto del castillo) de Llanes, provincia de Oviedo.
- Real Orden de 1 de mayo de 1877, por la que se exceptúa de la venta de Bienes Nacionales, para que se conserve como Monumento histórico y artístico Nacional, el edificio conocido como Sinagoga del Tránsito, en Toledo.
- Real Orden de 12 de mayo de 1877, por el que se dispone sea exceptuado de la venta de Bienes Nacionales, por ser Monumento artístico nacional, el monasterio de Santa María de Irache, Yesa, en la provincia de Navarra.
- Real Orden de 24 de mayo de 1877, por el que se resuelve sea exceptuada de la venta de Bienes Nacionales, por ser Monumento Histórico y Artístico digno de ser conservado por la Nación, la iglesia basílica de San Gerónimo de la ciudad de Granada.
- Real Orden de 14 de agosto de 1877, Monumento Nacional Histórico y Artístico, el ex-monasterio de Nuestra Señora del Prado, extramuros de Valladolid.
- Real Orden de 11 de octubre de 1877, Monumento Nacional Histórico y Artístico, la capilla conocida con el nombre de Arquito de San Lorenzo, de la ciudad de Jaén.
- Real Orden de 13 de marzo de 1878, Monumento Nacional Histórico y Artístico, el monumento conocido con el nombre de Puerta de Sol, en la ciudad de Toledo.
- Real Orden de 6 de septiembre de 1878, Monumento Histórico Nacional, El Castillo de Torre de Mormojón, en Torremormojón, provincia de Palencia.
- Real Orden de 1 de marzo de 1879, , Monumento Nacional Histórico-Artístico, El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la provincia de Cáceres. Por Real Orden de 19 de enero de 1929, fue ampliada y aclarada la iglesia, el monasterio, claustro gótico, dependencias, muros y espacios libres, que forman un conjunto rodeado de murallas y torreones; Nuevamente ampliada por Decreto de 3 de junio de 1931, Art.1º.

- Real Orden de 18 de julio de 1879, Monumento Nacional Histórico-Artístico, Gaceta, 30 de julio de 1879, el ex convento de San Pablo del Campo, en Barcelona.

- Real Orden de 24 de abril de 1880, Monumento Nacional Histórico-Artístico, el ex monasterio, con su iglesia, de Benedictinos de la Oliva, en Carcastillo, provincia de Navarra.

- Real Orden de 4 de febrero de 1881 (no fue publicado en la Gaceta), por la que se exceptúa de la venta de Bienes Nacionales, como Monumento Nacional, por su valor histórico y artístico, el ex convento de San Francisco, en Palma de Mallorca, provincia de Baleares.

- Real Orden de 10 de octubre de 1881, Monumento Nacional Histórico-Artístico, La puerta de Bibarrambla, conocido vulgarmente con el nombre de Arco de las Orejas, en la ciudad de Granada.

- Real Orden de 10 de diciembre de 1881, Monumento Nacional Histórico-Artístico, la iglesia de la antigua colegiata de Santa Ana, de la ciudad de Barcelona.

- Real Orden de 4 de marzo de 1882, Monumento Nacional Histórico-Artístico, la iglesia de Santa Engracia, en la ciudad de Zaragoza.

- Real Orden de 26 de julio de 1882, Monumento Nacional Histórico-Artístico, la iglesia basílica de los Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta, en la ciudad de Avila.

- Real Orden de 25 de agosto de 1882, Monumento Nacional Histórico-Artístico, Monumentos Nacionales Históricos y Artísticos, las ruinas de Numancia, en Garray; la iglesia de San Juan del Duero, en Soria y el ex monasterio de Santa María de Huerta, en Soria.

- Real Orden de 21 de noviembre de 1882, Monumento Nacional Histórico-Artístico, la iglesia catedral de la Asunción de Nuestra Señora, de Córdoba.

- Real Orden de 5 de junio de 1883, Monumento Nacional Histórico-Artístico, la iglesia de San Juan de los Reyes de Granada.

- Real Orden de 20 de marzo de 1884, Monumento Nacional Histórico-Artístico, Las murallas de la ciudad de Avila de los Caballeros.

- Real Orden de 20 de marzo de 1884, Monumento Nacional, Las murallas de la ciudad ciclópea de Tarragona.

- Real Orden de 18 de abril de 1884, Monumento Nacional, El ex convento de San Gregorio de la ciudad de Valladolid.

- Real Orden de 19 de abril de 1884, Monumento Nacional, la Real Colegiata de Nuestra Señora de Covadonga, en Cangas de Onís, en la provincia de Oviedo.

- Real Orden de 19 de mayo de 1884, Monumento Nacional, la capilla de San Jerónimo, existente en el convento de la Concepción Francisca, de Toledo.

- Real Orden de 19 de mayo de 1884, Monumento Nacional, La Real Capilla de los Santos Juanes de Granada.

- Real Orden de 14 de junio de 1884, Monumento Nacional, La iglesia Colegial de Santa María de Calatayud, en la provincia de Zaragoza.

- Real Orden de 11 de octubre de 1884, Monumento Nacional, el acueducto romano de Segovia.
- Real Orden de 16 de diciembre de 1884, Monumento Nacional, la iglesia colegiata de Santa María de Tudela, en la provincia de Navarra.
- Real Orden de 24 de enero de 1885, Monumento Nacional, la sinagoga de Córdoba.
- Real Orden 24 de enero de 1885, Monumento Nacional, las iglesias de Santa María de Lino y Santa María del Naranco.
- Real Orden de 18 de abril de 1885, Monumento Nacional, el claustro e iglesia de San Pedro el viejo, en la ciudad de Huesca.
- Real orden de 8 de abril de 1885, declarando monumento nacional la Santa iglesia Catedral de Burgos. Real Orden de 24 de agosto de 1885, declarando Monumento Nacional, la ermita de Santa Cristina, en el consejo de Lena, en la provincia de Oviedo.

Sin duda una de las dificultades que la Administración se va a encontrar a la hora de incoar un expediente de Declaración de Monumento Nacional será el régimen patrimonial del bien a proteger, ya que si formaba parte de la esfera privada hasta donde podía llegar la tutela pública. Probablemente podamos afirmar que sea este el motivo primordial de la carencia de una promulgación legal sobre declaración del Monumento Nacional, ya que se tenía que equilibrar el derecho del propietario del inmueble con el intervencionismo estatal. A pesar de ello podemos comprobar en las distintas disposiciones legales de los bienes inmuebles declarados Monumentos Nacionales de cuál podía ser los límites que tendrían los particulares y las Corporaciones Públicas y Privadas a la hora de su disposición y gozo una vez que había sido declarados Monumentos Nacionales, la excepción de la venta y su conservación por el Estado. En la lectura de la declaración del Castillo de Real como monumento nacional por Real orden de 6 de septiembre de 1878, queda resumido el significado jurídico que había adoptado esta figura, que en muchas ocasiones quedaba envuelto por la duda de su régimen patrimonialista, como podemos deducir de estas conclusiones:

1º) Su declaración vendría fundamentado por su interés histórico, como consta en el propio Decreto: que ocupado por sorpresa por los Imperiales en 1521 fue después de breve sitio tomado por el capitán navarro D. Francés de Beaumont, que militaba a las órdenes de Juan de Padilla.

2º) El Informe facultativo por consiguiente lo haría la Real Academia de la Historia, no interviniendo en este caso la de Bellas Artes de San Fernando. No obstante, cabe mencionar como la propia opinión pública local va a ir concienciando la importancia de ser declarado Monumento Nacional.

3º) La causa primordial de esta declaración se basaba en que el castillo iba a ser vendido por su dueño, con el fin de utilizar sus materiales para la construcción.



4º) El Estado, al ser declarado Monumento Nacional, adquiriría el edificio, pasando a dominio público, con el fin de salvaguardar la obra.

5º) La conservación pasaría a la inmediata inspección y custodia de la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos de Palencia.

#### **2.5.1. Un incipiente procedimiento administrativo.**

Una de las carencias más significativa a la hora de proceder a declarar algún bien de interés histórico y artístico fue la existencia de un verdadero procedimiento administrativo, por lo que en muchas ocasiones quedaba reducida a una verdadera declaración de intenciones. No obstante, se fue precisando algunos puntos esenciales a la hora de delimitarse un verdadero procedimiento administrativo reglado para que un bien fuese declarado Monumento, de las que podemos resaltar las siguientes cuestiones:

1º) *Se establecería cuales serían los organismos públicos o particulares que pudieran incoar el expediente de declaración.* La iniciativa para proceder a su declaración podía partir a instancia, por lo general, de autoridades municipales, Comisiones de Monumentos o propietario del edificio, al Ministerio de Fomento, el cual solicita informe de las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia. A partir de 1878 las Comisiones de Monumentos se encargarían de una nueva actividad como fueron la elaboración de los expedientes de declaración de Monumentos Nacionales. Al mismo tiempo la Real Academia de la Historia encargaba el informe a la Comisión de Antigüedad la cual nombraba a uno o varios de sus individuos para la elaboración del informe correspondiente. Una aprobada en Junta por la Academia era remitida al Ministerio<sup>2513</sup>.

2º) *La publicación de la declaración de Monumentos.* Es también el año 1877 cuando la Real Academia de San Fernando renueva la moción elevada tres años antes al Ministerio de Fomento –al cual pertenecía la Dirección General de Instrucción Pública– en la que se expresa que estas declaraciones conviene que reciban publicidad y sean revestidas de cierta solemnidad, que las autorice y dé estabilidad..., estableciendo la costumbre de publicar todas las declaraciones de monumentos nacionales históricos y artísticos en la Gaceta del Gobierno y en los Boletines de las provincias respectivas, acompañando siempre copia de los informes de las Academias y Comisiones de Monumentos en que se funde la declaración. Una vez aceptada la sugerencia, comenzaría a publicarse las declaraciones en la “Gaceta de Madrid”, siendo la primera el monasterio de Nuestra Señora del Prado, extramuros de Valladolid.

---

<sup>2513</sup> PARRONDO, C. de *Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España. Declaraciones de Monumentos y Conjuntos Históricos Artísticos, Parajes Pintorescos y Jardines Artísticos*. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencias, 1975.

3º) *Formalidad legal*. Aunque tampoco existió ninguna disposición legal que así lo dispusiese las Declaraciones de Monumentos se podían hacer a través de una ley votada por las Cortes, por decreto o por real orden, según la importancia que se le daba al monumento en su momento, surgiendo incluso amplios debates institucionales a la hora de declarar un bien inmueble con esta delimitación. Por consiguiente, se convierte en un acto administrativo expreso dado por el Gobierno, solventando todo tipo de duda sobre el estado legal del inmueble.

4º) *Los Informes de las Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia como instrumentos administrativos consultivos en la declaración del Monumento*. El Informe positivo de ambas corporaciones, o de una, según la impronta que se le daba al Monumento, fue primordial a la hora de declarar como tal, en la que se exponía una descripción del propio edificio, en la que resaltaba los valores inherentes a los mismos. En caso de que el informe de algunas de estas instituciones fuera negativo prácticamente era inviable su declaración. Desde 1879, los informes serían publicados en el Boletín de la Real Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando.

#### **2.5.2. La exclusión de la venta y la conservación como potestad pública del Estado sobre los Bienes declarados Monumentos Nacionales, independiente de su régimen patrimonial.**

Quedaba exceptuado de la venta a ninguna corporación privada o pública y a ningún particular. Probablemente sea la consecuencia jurídica más importante de la declaración como bien a ser protegido por la autoridad pública. La mayoría de estos edificios fueron exceptuados de las medidas desamortizadoras que permanecían en vigor. En todos los expedientes de declaración siempre aparecerá durante esta etapa la coletilla de aparecer exceptuada de venta, por lo que se establecía en el bien inmueble una posición de defensa pública frente a cualquier tipo de interés particular. En el Informe a la Real Academia de la Historia de la Real Orden del día 6 de abril de 1872 para que fuera declarado Monumento Nacional el Monasterio de San Isidoro del Campo (Sevilla), tendría como objetivo primordial que no fuera vendido como bien desamortizado: *La Real Academia de la Historia recibió a su tiempo con mayor aprecio el traslado de la comunicación que V.S. dirigió con fecha de 27 de marzo último al Sr. Ministro de Fomento a fin de que gestionase con el de Gobernación para que se suspendiera la subasta del histórico monasterio de San Isidoro del Campo anunciada por la Dirección General de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales, coadyuvando la Academia a tan noble propósito y segundando además los deseos de V.S. recurrió inmediatamente al Gobierno con una razonada oposición y por medio de una Comisión de Sres. Académicos; habiéndose dado a consecuencias de estas gestiones, una Real Orden que el Sr. Ministro de Fomento con fecha 6 del corriente para que se suspenda la venta del mencionado monasterio y que sea declarado monumento histórico, excluido de la venta, y dependa*

*en lo sucesivo su conservación del Ministerio de Fomento (...)*<sup>2514</sup>. La conservación del Monumento en cuestión quedaba en este momento en manos del Estado, insertándose en una política de restauración que dependía a su vez del interés del mismo, para lo que podía o no quedar insertado en la partida presupuestaria anual que el Gobierno iría designando en los presupuestos generales anuales. Sería el Ministerio de Fomento el que se encargaría del bien inmueble declarado Monumento Histórico Nacional, para posteriormente ser incluido en el de Instrucción Pública y Bellas Artes.

### **2.5.3. La defensa del derecho de la propiedad privada como obstáculo en la declaración del Monumento Nacional.**

A la hora de abordar el estado ruinoso del monasterio de Oña en Valladolid, el académico de la historia Vicente de la Fuente en 1888 puntualizaba las dificultades que presentaba la declaración de Monumento Histórico-Nacional, que no solamente se encontraba en las dificultades económicas, sino en el más amplio obstáculo del régimen de propiedad en que se encontraba algunos de estos bienes históricos-artísticos: *Al acordar esta Real Academia que se excitare el celo de las Comisiones de Monumentos para la designación de los que deben ser considerados como Nacionales y también de los señores académicos de número, me propuse dar noticia a la Academia del Panteón Regio de Oña en la provincia de Burgos, bien como sea como un monumento verdaderamente histórico, aunque no se le declare nacional, por las dificultades que el asunto ofreciese y con que han de tropezar a veces la Comisiones de Monumentos en aquellas que son de propiedad particular, individual o colectiva, de la Corona o de la Iglesia, y aun los del Estado cuando son destinada a usos militares o burocráticos. En los Museos Provinciales la misión y la comisión suele ser fácil y conocida pues la propiedad y el dominio son del Estado, o de la Provincia, y nadie se la disputa reduciéndose cuando más las contiendas a reclamar algunos objetos que estando sin dueño, fueron recogidos por las comisiones o por autoridades celosas (...). Pero con respecto a objetos monumentales, históricos, arqueológicos o artísticos, muebles e inmuebles, de dominio particular, solo puede encargarse a las Comisiones provinciales, no la inspección y custodia sino la mera vigilancia. Pero que vigilancia puede ejercer en las que cosas que no son del Estado, ni están sometidas a su custodia, ni aun tienen derecho de inspeccionar de un modo oficial y autorizado. El derecho define lo que es el dominio y sus diferentes especies, la distinción entre la propiedad y el dominio, como así mismo entre la posesión y el depósito y otras nociones de este género, bien sabidos de los jurisconsultos, pero las de custodia, inspección y vigilancia no son tan obvias, y por (...) el celo, el patriotismo, el amor a las artes y conocimientos de nuestras glorias y tradiciones (...).* En el caso del Monasterio de Oña contemplaba la delimitación heterogénea del régimen de propiedad en que se hallaba inmersa: *Adquirido por la Compañía de Jesús ha costado más de un millón el repararlo, según se dice (...). Convertida la iglesia parroquial en almacén de provisiones durante la guerra civil de los siete años, se cedió la iglesia monástica al pueblo para parroquia, como otras varias de su clase.*

---

<sup>2514</sup> Informe de la Real Academia de la Historia del 16 de abril de 1872 para que sea declarado Monumento Nacional el Monasterio de San Isidoro del Campo.

*La cuestión jurídico-canónica de estas sesiones suele ser algo complicada (...). Resulta, pues, que el monasterio es de dominio particular y pleno, que por tanto no puede ser declarado nacional, y que el uso aún lo disfruta el pueblo, aunque reintegrado en el de la iglesia parroquial*<sup>2515</sup>, precisando las dificultades que la Comisión Provincial de Burgos tendría a la hora de tutelar su protección al ser limitada por el derecho de la propiedad privada de su propietario: *Si la Comisión provincial de Burgos no tiene derecho de propiedad ni dominio, ni aún de inspección en el monasterio de Oña, como en otros monasterios tiene otras comisiones, ni este puede ser nacional por ser de dominio particular, cábele el deber más que de derecho de vigilancia sobre sus antigüedades, con el respecto a la propiedad particular, individual o colectiva, conforme a las leyes. Más con respecto a la Iglesia, tiene mayores derechos y deberes, siendo de uso público, de propiedad y posesión parcial entre la Iglesia, el Estado, la Corona y el pueblo. En el caso del Panteón, el régimen tutelar podía ser matizado, si hubiera pertenecido al Patrimonio de la Corona, como en el caso de otros monasterios: Y por lo que hace al Panteón, tiene al menos la Comisión, en mi juicio, algún deber más que de vigilancia. La calidad de este dominio ha sido controvertida. Si el panteón fuese de Real patrimonio, como los de la Huelga, la Granja, El Escorial y otros, sería el dominio de la Corona; pero esta ni conservó, ni ha reclamado el de Oña, y el Estado se incautó de él pro derelicto, como de los de Leire, San Juan de la Peña, y aún de los de Poblet y Santa Creus, verdaderamente regios y reales, de que se apodero no pro derelicto, sino pro expoliato, y después de saqueos y vandálicos destrozos. El caso del panteón de Oña es distinto, pues no ha sido objeto de expoliación ni aún de abandono, puesto que ha seguido el culto en la Iglesia, y para el culto se cedió al parecer en uso. En la dificultad de deslindar las cuestiones acerca de la propiedad de los célebres monasterios de la provincia de Burgos, sus iglesias, y sus históricos panteones, de tan variada procedencias y de controvertidos dominios, conviene recomendar a la Comisión de Burgos la vigilancia en los de Cardena y Oña, y sobre todo en el célebre cuanto remoto y olvidado de ésta, que por la misma razón de no ser del Real Patrimonio, como lo es de las Huelgas en lo secular, con todo lo es indudablemente del Real Patronato, por razón de su fundación y origen, y sobre todo en lo relativo al panteón condal y regio (...)*<sup>2516</sup>.

La Casa del Cordón, el antiguo Palacio de los Condestable de Castilla, en Burgos, puede ser nuevamente un ejemplo significativo de las limitaciones que tendría el Estado para declarar como Monumento Nacional a un bien inmueble que estuviese en el ámbito de la esfera privada. La documentación conservada por la Real Academia de la Historia al respecto es muy ilustrativa, en el Oficio de 12 de enero de 1886, dirigida a la Real Academia de la Historia se comunicaba que el inmueble había pasado a propiedad particular, mediante una adquisición por escritura pública, teniendo la intención los actuales propietarios de derribarlo, tal como expresa literalmente el documento: *Primero. Que es cierto el haber pasado el Palacio de los Condestables de Castilla a ser propiedad particular por venta mediante escritura pública; Segundo: Que el*

<sup>2515</sup> CAL, Rosa, 2003, p.195.

<sup>2516</sup> DE LA FUENTE, Vicente, 1889, pp.206-207.

*referido Palacio será demolido de un momento a otro, pues sus actuales poseedores han pedido permiso al Excmo. Ayuntamiento de esta localidad. La Real Academia de la Historia enviaría un oficio el 17 de enero de 1886 al Gobernador Civil de la ciudad, que al mismo tiempo era el Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, para que evitara la demolición: Enajenado el Palacio de los Condestables de Castilla de esa histórica ciudad a un particular, y destinado por el comprador a ser demolido para levantar en su solar un nuevo edificio, esta Real Academia no ha podido permanecer indiferente a tamaña pérdida aplicándole algún uso público. En la comunicación elevada al Sr. Ministro de Fomento, se le pide que, se sirva enviar a V.S. sus órdenes para que, inspirando en el actual propietario la noble idea de servir a la cultura patria, procurar V.S. obtener de él la cesión del edificio al Estado. La Comisión Provincial de Burgos instaría finalmente a la Real Academia de la Historia para que interpusiera su influencia con el Gobierno de la Nación, logrando la cesión del Palacio, y en última instancia fuese declarada Monumento Nacional. Sin embargo, nos encontramos nuevamente los límites en el férreo derecho de la propiedad privada, como se subraya en el propio Informe: en la que se acordó facilitar antecedentes a ese Centro literario y hacerle indicaciones respecto al destino que pudiera darse al mencionado edificio para que sacándole de la propiedad particular fuera declarado Monumento Nacional. La antigua Casa del Condestable de Castilla fue enajenada hace cosa de tres años por su poseedor el Señor Duque de Frías, la cual fue nuevamente vendida a D. Tomás Conde y D. Antonio Martínez, vecinos de Burgos, los cuales tienen el propósito de demoler el citado edificio (...) Dado el tiempo en que oportunamente se han comenzado las gestiones para impedir la demolición de tan artística como histórico Palacio, no se está en el caso de salvar su portada, como parece indicarse en una reciente comunicación de la Dirección general de Instrucción Pública, dirigida a los actuales poseedores y de la que no tiene conocimiento oficial esta Comisión, sino antes por el contrario de conseguir la conservación íntegra de tan importantísimo Monumento, hoy completo, y al que podría devolverse su primitivo carácter con una fácil y poco costosa restauraciones. Van a existir un amplio número de casos en que el bien inmueble no será declarado Monumento Nacional al tratarse de una propiedad privada, por lo que el Estado no tendría suficiente potestad para poder transformarlo en propiedad pública. En el **Informe de la Real Academia de la Historia de octubre de 1884** sobre la comunicación remitida por Elías Romera acerca de la ermita de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, se señala la imposibilidad de su declaración como Monumento Nacional, al tratarse de una propiedad particular, y la necesidad de cederla para uso con fines religiosos: El Sr. D. Elías Romera concluye con algunas otras observaciones, indicando que convendría se declarase monumento nacional, cosa imposible siendo de dominio particular, o se dedicase a algún uso eclesiástico o religioso, lo cual solo podría tener lugar cediendo el edificio su dueño al ordinario.*

#### **2.5.4. La cesión de los bienes declarados Monumento Nacional a instituciones públicas y privadas por utilidad pública.**

En algunos casos el Estado cedería el bien inmueble a algunas instituciones públicas, por causa de utilidad pública, como fue el caso de la



cesión del antiguo monasterio de Irache a la Diputación de Navarra. Para ello se fue creando una verdadera formulación administrativa mediante un oficio por el que la Comisión de Monumentos, en este caso de Navarra, solicitaba a la Real Academia de la Historia que interviniera para la cesión del abandonado Monasterio de Irache a la Diputación de Navarra, fundamentando para ello el estado de abandono en que se encontraba: *Este celebre monasterio estuvo abandonado, como casi todos los de su clase, durante largos años, y si no llegó a destruirse por completo fue tal vez porque un venerable sacerdote, el Sr. Vicario (...) impulsado por su cariño a aquel monumento, donde en otros tiempos recibieron recibiera su instrucción, tuvo la abnegación de ir a habitar aquellas ruinas constituyéndose en su solitario guardador. A pesar de los esfuerzos de este benemérito sacerdote y de la vigilancia de la Comisión, este notable monumento hubiera concluido por arruinarse, pero la Providencia que sabe sacar el bien del mal, hizo que la guerra, que tanta ruina iba a causar en este país fuese la causa de su reparación. Los carlistas establecieron en él un magnifico hospital, y restauraron, bajo la dirección, según parece, de un caballero inglés, la hermosa iglesia de Santa María, la Real (...) Terminada felizmente la guerra el Monasterio ha vuelto a su silencio y abandono, y el tiempo continuará su obra destructora si no se remedia este estado de cosas.* La Comisión daría un Informe favorable siempre que se comprometiera a respetar los valores históricos y artísticos del edificio: *La Comisión aplaude pues con entusiasmo el proyecto de la Excm. Diputación de Navarra, que se compromete, en caso de que dicho edificio le sea cedido, a conservar la iglesia, el bellissimo claustro y en fin, cuanto en él tenga algún valor histórico o artístico (...).* Por eso, la Comisión no titubea en acudir a la ilustre Academia de la Historia rogándole que interponga su poderosa y legítima influencia, a fin de que el monasterio de Irache sea cedido a la Diputación de Navarra, entendiéndose siempre que dicha Corporación se comprometa a conservar la iglesia y claustro procesional y todo cuanto tenga alguna importancia histórica o artística, debiendo tener la Comisión de Monumentos la debida intervención, tanto durante la ejecución de las obras como después, a fin de que no se mutile ninguno de aquellos preciosos restos. La Real Academia de la Historia intercedería ante el Ministerio de Fomento para que se llevara a cabo la cesión del Monasterio a la Diputación de Navarra. 2 de diciembre de 1876. El edificio, bajo titularidad del Estado y fue declarado monumento histórico-artístico por Real Orden de 24 de abril de 1877. El 24 de mayo de 1879 sería cedido a la Diputación de Navarra la donación del Monasterio de Irache.

#### **2.5.5. Las disposiciones legales sobre construcción, reparación y venta de edificios públicos, para todos los servicios de la Administración del Estado, que en su mayoría fueron edificios desamortizados en la España de la Restauración. La tutela especial a los bienes inmuebles declarados Monumentos Nacionales.**

Los antiguos edificios desamortizados que habían pasado a formar parte de la propiedad del Estado y que habían pasado a ser edificios públicos fueron objeto de una serie de disposiciones legales con el fin de salvaguardar todos los elementos de interés histórico o artístico, especialmente aquellos bienes inmuebles que habían sido declarados Monumentos Nacionales. En la **Ley del**

**21 de diciembre de 1876**, serían dictadas las disposiciones para la adquisición, construcción y reforma de edificios destinados a oficinas y otros servicios del Estado. En su artículo 1º se dispondría que el Gobierno, en base a los inventarios que existiesen, formase *una general de los edificios públicos que en Madrid y en las provincias pertenecen al Estado y están poseídos por el mismo*, al mismo tiempo que se designarían *los edificios que por sus deterioros, o por no ser notables por ningún concepto, o por la situación que ocupan, no convenga conservar, a fin de que puedan enajenarse en subasta pública, previa su medición y tasación* (art.2), reservándose el Gobierno *el derecho de conservar y trasladar á los Museos cualquier objeto o fragmento artístico que se encontrare en los edificios que se vendan, sin que el comprador pueda disponer de ellos aún cuando fueren hallados después de la toma de posesión* (art.2). Las ventas se harían a pagar en metálico en tres plazos y dos años. El primer plazo se satisfará al contado y será del 20 por 100. El segundo y tercero serán el 40 por 100 cada uno, pagándose al año y a los dos años de haberse realizado la venta (art.3), destinándose el precio de las ventas exclusivamente a la construcción de otros edificios para todos los servicios y usos públicos, y a la reparación y reforma de los antiguos que se conserven, con igual aplicación se dará a las cantidades que se economicen para los alquileres que hoy paga el Estado (art.4). Las edificaciones se verificarán con arreglo a los planos y condiciones que el Gobierno apruebe, previo informe de la Real Academia de San Fernando (art.6º). Para su ejecución sería creada una Junta, presidida por el Ministro de Hacienda, y compuesta de los Presidentes del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo, de Justicia, del de Cuentas del Reino y del Director general de Ingenieros Militares, de un Senador y un Diputado nombrado por el Gobierno, del Presidente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y del Director General de Propiedades y Derechos del Estado. Será Secretario de esta Junta un Oficial del Ministerio de Hacienda o un Jefe de Administración de la Dirección de Propiedades (art.10).

**El 5 de febrero de 1877** el Gobierno daba a conocer una Instrucción en la que proponía las normas que se había de seguir a la hora de realizar los inventarios de aquellos edificios que habían sido desamortizados pero aún no se habían declarados como monumentos nacionales. Para ello se establecería que los inventarios debían de realizarse bajo la dirección de los gobernadores provinciales, que a su vez debían de dar unas instrucciones a los jefes económicos. Para ello se establecería que los inventarios debían de ser los más detallados posibles, haciéndose en varias copias, quedando el original en la Sesión de Propiedades de las provincias respectivas. Al remitir los inventarios, los Gobernadores debían de dar las explicaciones necesarias para que se comprendiese la utilidad que reportaría al Estado la conservación o no de los edificios, teniendo la facultad de que cuando lo considerara oportuno podría establecer su conservación por los recuerdos que representase o las bellezas artísticas que contuviese. En la ley se establecería las medidas pertinentes en

orden a conservar aquellos edificios públicos que se considere digno de conservarse. En el artículo 19 precisa el papel que va a tener los Gobernadores Civiles al respecto, concretamente al remitir los inventarios, que darán *las explicaciones convenientes para que pueda desde luego comprenderse la utilidad que reportará al Estado de conservar o no ciertos edificios*, precisando para ello que *cuando lo crean acertado para fortalecer su opinión, deberán oír á cualquier otra Autoridad ó Corporación respecto al uso a que pueda destinarse un edificio, o a la conveniencia de conservarlo por los recuerdos que represente ó las bellezas artísticas que contenga. Cuando así lo dispongan, harán mérito en sus comunicaciones del parecer de la Autoridad ó Corporación consultada.* Un hecho revelador de esta medida es el contenido en el artículo 40 al disponer que *Si en el reconocimiento necesario para la tasación encontrasen los Arquitectos objetos o fragmentos artísticos dignos de conservarse, lo expresarán así proponiendo desde luego su traslación a los Museos Públicos. Los objetos de esta clase que se descubran después de la toma de posesión por el comprador tendrá esta obligación de entregarlos, según el artículo 2º de la ley, y el Gobierno podrá en todo caso exigir que se le entreguen.*

Con la promulgación de la **Real Orden circular de 1877** se excitaba el celo de los Gobernadores de las provincias y dándoles algunas instrucciones para el cumplimiento de la ley sobre construcción, reparación y venta de edificios del Estado, y muy particularmente sobre la formación de inventarios exactos y completos. Una nueva disposición, **la Real Orden de 11 de marzo de 1881**, precisaría aun más la tutela pública en la restauración de aquellos inmuebles dependientes del Ministerio de Fomento, que reproducía a su vez la del 24 de mayo de 1873, relativa a los requisitos que han de tener los expedientes sobre construcción y reparación de edificios dependientes del Ministerio de Fomento, por el que había pasado a depender de la Dirección General del Ministerio todos los expedientes incoados en los diversos centros correspondientes a este Ministerio, referentes a las obras de reparación, reformas y restauraciones que debían practicarse en los diferentes edificios que tienen relación con los mismos, como igualmente los relativos a aquellos que deben ser considerados como monumentos históricos, por lo que se establecía que los Jefes de los establecimientos públicos, ya fueran Universidades, Bibliotecas, Archivos, Museos o Monumentos Históricos, después de haber obtenido la correspondiente autorización de los centros de que dependían, debían remitir a la Dirección general de Obras Públicas los proyectos de las obras nuevas, reparaciones o reformas, compuestos de Memorias, planos, presupuesto y pliegos de condiciones facultativas y económicas (art.1º), y a su vez todos los proyectos de obras de nueva construcción y los de reparación o reforma, cuando estos afectasen a las fachadas, capillas, paraninfos y salones decorados, tendrían que pasar a informe de la Academia de San Fernando con objeto de que fuera conocido su dictamen antes de que fuera dictada la resolución por la Dirección general (art.2º). Finalmente, se promulgaría el **Real decreto de 27 de septiembre de 1881** por el que se dispondría que las

Comisiones provinciales formasen un inventario de los edificios públicos y demás bienes inmuebles pertenecientes a las respectivas provincias.

## **2.6. El aparente deber de conservación de las Corporaciones Municipales de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico.**

### **2.6.1. Los conflictos entre los principios de modernidad urbanística y conservacionismo, reflejo de la contraposición entre los intereses públicos y privados.**

En los años finales del siglo XIX la demolición de una serie de bienes inmuebles de interés histórico y artístico como torreones, arcos, postigos e incluso murallas que todavía pervivían en muchas ciudades españolas fue un hecho incuestionable, bien por la pasividad de las propias Corporaciones Municipales, que superponían los intereses de sus dueños sobre el interés general, bien por una acción activa del propio Municipio fundamentado en los principios de higiene y salubridad, e incluso por unos intereses puramente modernizadores de la ciudad, que chocaron con algunos sectores inmovilistas. No cabe duda que hubo una actitud pasiva por parte de las autoridades de muchas Corporaciones Municipales con el fin de los intereses privados de los particulares representado por una burguesía conservadora que sustentaba su poder político como denunciaría Gómez Moreno en el caso de Granada: *Alcalde ha habido que no obedecido, como debiera, las órdenes de una autoridad superior de su provincia, que le prohibía echar abajo una hermosa obra antigua de carácter monumental, solo por el placer de ver desaparecer aquella cosa que, para él y otros que tenían su mismo criterio, afeaba el sitio en que se encontraba*<sup>2517</sup>. Nuevamente los principios de salubridad e higiene así como una aparente modernidad de las urbes se convierten en los verdaderos fundamentos de la intervención de las Corporaciones Municipales sobre el tejido urbano, en muchos casos transformándolos, y en otros desvirtuándolos. En el texto del arquitecto decimonónico Modesto Fossas Pi perteneciente a su obra *Tratado de Policía y Obras Públicas Urbanas*, distingue a modo de comparación la ciudad que temporalmente va a ir quedando atrás, la ciudad antigua y la moderna ciudad burguesa, realizando una amplia defensa de ésta por los beneficios en higienes, ornato y seguridad pública que conlleva, incluso apreciando una preeminencia del interés general sobre el particular: *El viajero que por primera vez salva las puertas de una población, juzga de su gobierno, de sus circunstancias climatológicas, de su civilización, en fin, por su policía urbana, por las multiplicadas pruebas que las aplicaciones de esta parte de la Administración muestran por doquier de todos aquellos eslabones del grado de su cultura. En las calles, en los paseos, en las casas particulares, en los edificios públicos, en todos los puntos del área que nos ocupa el casco antiguo, descubre las evidentes señales a que nos referimos. Para convencerse de esa verdad, recuerde el lector las impresiones recibidas en sus viajes y ponga en parangón una de estas ciudades, del que tanto ejemplares nos quedan en España, que conservan todavía por completo el carácter de siglos pasados, con otra de la del*

---

<sup>2517</sup> GÓMEZ MORENO, M., 1884, p.1.

*misimo país ó del extranjero que, con las reformas de que constantemente son objetos y los beneficios que de la policía urbana reciben, se hallan al nivel de los adelantos y de las necesidades de la época presente. Al llegar a la primera por no muy cómodo camino, se la ve rodeada de espesos y elevados muros flanqueados de almenadas torres, siendo forzoso penetrar por defendidas puertas, tras las cuales se desarrollan en el mayor desorden una red de laberínticas, estrechas y tortuosas calles mal empedradas, peor alumbradas, nada limpia y de desigual rasante, donde amenazan de continuo la vida del transeúnte el sinnúmero de edificios ruinosos, cuyos aleros de opuestas aceras llegan poco menos que a besarse, y donde innumerables cuerpos de exageradas salida, que no pocas veces llegan hasta á salvar gran parte del ámbito de la vía pública, acusan el mayor desorden en la edificación, y frecuentemente las invasiones del interés particular en el derecho de la generalidad. En cambio, el ferrocarril penetra en la segunda, que abierta por sus cuatro costados, presenta su área indefinida dispuesta siempre al progreso y al ensanche. Cómodas, anchas, limpias y prolongadas calles forman un sistema viable (...) La igualdad de todos ante la ley común protectora de la comunidad, es lo que aquí se observa en alineaciones, salidas, y alturas de las fachadas sin que, como antes, descubramos en los abusos en esta parte, el derecho del más fuerte. Muy interesante es su reflexión sobre la distinción que hace entre los edificios del pasado, al precisar que no todos ellos merecen por parte de las autoridades públicas su conservación, sino solo los que verdaderamente están imbuido de un verdadero interés histórico o artístico, a los que estos sugiere darles un protagonismo en la nueva ciudad como reflejo del pasado histórico: Si en la primera la poca vida y el escaso progreso justifican, más que el interés arqueológico y artístico, la existencia de gran número de edificios, productos de edades pasadas, en estado de dudosa conservación la mayor parte y no todos igualmente apreciables (...) ha llegado para la segunda la distinción entre las obras antiguas que no interesa mantener en pie y aquellas que calificadas de obras de arte, deben ser conservadas, y se guardan, en efecto, cual preciosas joyas para que se destaquen entre los modernos barrios y sean en ellos el centro de atracción por los venerados recuerdos que inspiran (...)*<sup>2518</sup>.

### **2.6.2. Una escasa regulación de la tutela municipal sobre el Patrimonio Monumental.**

La actitud del propio Estado ante la actuación de las Corporaciones Municipales va a seguir siendo limitada en este periodo, aunque no cabe duda que va a ir surgiendo una amplia producción normativa en la que se obligan a las instituciones municipales a la conservación del Patrimonio Municipal. Las más importantes disposiciones normativas serían:

- La pervivencia de la Real Orden de 28 de abril de 1865.
- El artículo 11 de la ley de Obras Públicas de 13 de abril de 1877. Se declara que corresponde a los Ayuntamientos la conservación de los monumentos artísticos e históricos, así como se reiteraba que en

<sup>2518</sup> FOSSAS PI, Modesto *Tratado de Policía y Obras Públicas Urbanas. En el concepto de su legislación antigua y moderna*, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez y Compañía, 1872, p.6.



todas las leyes que tengan relación en las obras de arte se reiteran las obligaciones de los Municipios a respetar y a conservar, y los derechos de las Academias y de las Comisiones de Monumentos a hacer que esas obligaciones se cumplan.

- En el Reglamento de la ley de ensanche de poblaciones de 19 de febrero de 1877, se exigía la audiencia previa de la Academia de San Fernando para la aprobación de todo proyecto de ensanche (art.9).

***- La pervivencia del Real Decreto de 16 de diciembre de 1873 sobre conservación de bienes inmuebles de interés histórico y artístico: La paralización del derribo del Arco de San Lorenzo de Jaén.***

La paralización del derribo del arco de San Lorenzo de Jaén se convierte en uno de los únicos casos de inmuebles de interés histórico y artístico que se pudieron salvar de la política municipal de una aparente modernización del tejido urbano. El relato de Amador de los Ríos es ilustrativo del hecho y al mismo tiempo nos ayuda a abordar claramente cuáles eran los principios por el que estaban fundamentado la intervención de la Corporación Municipal: *Las desgracias frecuentes que ocurrían al paso de los carruajes por la bóveda del Arco; el albergue que dicha bóveda ofrecía á gente vaga, maleante y poco respetuosa, y los desórdenes de la misma, con lo que a la continua era profanada la Capilla u Oratorio colocado a un lado de la propia bóveda, apuraban de tal suerte la paciencia de los vecinos de la calle Maestre Alta y de las colindantes, como para acudir en 1867 al Municipio pidiendo la demolición del Arco.* El procedimiento que siguió la Corporación Municipal era el usual en estos casos: *Tramitado desde entonces el expediente, previas las informaciones necesarias y el dictamen facultativo, nadie a él se opuso, pues según del mismo resultaba dicho Arco no ofrecía belleza artística alguna que mereciera conservarse, ni era monumento recordatorio de pasadas glorias, por lo que en el Boletín Oficial de la provincia, correspondiente al jueves 3 de agosto de 1877, esto es, diez años después de promovido sin oposición el expediente, la Corporación Municipal, deferente con el vecindario, publicaba un edicto manifestando haber acordado la demolición del Arco llamado de San Lorenzo, sacándola a pública subasta, para cuyo remate señalaba el 29 del mes siguiente de septiembre.* Las oposiciones a la demolición por parte de la opinión pública y algunos sectores de la erudición local no se harían esperar: *Conocido era antes de su publicación en el Boletín el acuerdo del Municipio, contra el cual se apresuraban á protestar ante el gobernador enérgicamente el 12 de agosto los individuos de la Comisión Provincial de Monumentos (...), para quienes el antiguo Arco de San Lorenzo era tal vez el único monumento anterior á la Catedral, que en Jaén se conservaba.* El Gobernador Civil de la provincia, que era la única autoridad que podía revocar la decisión municipal no lo hizo, por lo que se enviaría una instancia a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando denunciando el acuerdo, protestando de la conducta del gobernador, y procurando

interesar a la Academia, pues según él era tal monumento el único que resta de la antigüedad en esta capital (...). Sería el académico Pedro Madrazo el encargado de redactar una comunicación el 23 de septiembre dirigida al Gobernador, manifestando que el Arco que se trata reúne todos los requisitos que exige el Decreto de 16 de diciembre de 1873 para ponerle á salvo de cualquier acto de la autoridad local que tienda a destruirlo o menoscabarlo, y que debía de suspender inmediatamente tan vándala medida, replicando el Gobernador el día 27 de septiembre por el que el ayuntamiento había procedido en uso de su derecho; que la denuncia no estaba hecha por la Comisión de Monumentos, pues él era el Presidente y no había intervenido en ella; mientras que esa Comisión de Monumentos de una manera oficial y tangible no demuestre á este gobierno, decía, que el Arco de San Lorenzo reúne las condiciones del Decreto de 1873, no podía suspender el Acuerdo del Municipio, y que era inconveniente llamar vandálica una medida acordada por el Ayuntamiento dentro de sus facultades. Sin embargo, como indica el erudito sevillano las intervenciones de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes que a su vez habían dirigido una instancia al Ministro de Gobernación, Francisco Romero Robledo, quien mandaría suspender el citado acuerdo municipal, suspenso ya por el Ayuntamiento en vista de la comunicación de la propia Academia que lleva fecha de 23 de septiembre. De esta manera para su mejor conservación sería declarada Monumento Nacional por la que se solicitaría del Ministerio de Hacienda la excepción de la venta de dicho edificio, y la cesión del mismo a Fomento para entregarlo a la Comisión Provincial de Monumentos de dicha ciudad, encargada de su conservación y custodia<sup>2519</sup>.

*- La impronta de la Real orden del 13 de abril de 1877 reguladora de las obras públicas en la tutela de los bienes declarados Monumentos históricos y artísticos.*

La promulgación de la **Real Orden del 13 de abril de 1877** regulando las obras públicas tuvo su reflejo en la protección de aquellos bienes inmuebles declarados Monumentos históricos y artísticos, regulándose las obligaciones que debían asumir las distintas instituciones públicas. En su artículo 1º definiría el concepto de obras públicas como aquellas que fueran de general uso y aprovechamiento, y las construcciones destinadas a servicios que se hallasen a cargo del Estado, de las provincias y de los pueblos, perteneciendo a estas los edificios públicos destinados a servicios que dependieran del Ministerio de Fomento (art.1º). Se establecía como atribución del Ministerio de Fomento todo lo concerniente a la construcción, ampliación, mejora y conservación de los edificios públicos destinados a servicios que dependen del mismo, así como las construcciones que tengan el carácter de monumentos artísticos e históricos (art.8º), de la Administración Municipal, con arreglo a su ley orgánica, la construcción y mejora de los edificios de carácter provincial destinados a servicios públicos dependientes del Ministerio de Fomento y la

<sup>2519</sup> AMADOR DE LOS RIOS *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año IX, 1905, Núm.I. Enero a junio, pp.185-187.

conservación de los monumentos artísticos e históricos (art.10.4) y de la Administración municipal, el conocimiento, con arreglo a las leyes orgánicas de la construcción y mejora de los edificios de carácter provincial destinados a servicios públicos que fuesen dependientes del Ministerio de Fomento, así como la conservación de los monumentos artísticos e históricos (art.11.5).

*- El deber de conservación de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico en los planes de ensanche aprobados por las Corporaciones Municipales: El Reglamento del 19 de febrero de 1877 y el Real Decreto de 12 de marzo de 1878.*

Con la política de ensanches de las poblaciones que se fueron realizando a lo largo del periodo de la Restauración se puso en peligro un gran número de bienes inmuebles de interés histórico y artístico, por lo que se comenzó a regularse una verdadera normativa, que en su mayor caso no se cumpliría. En el **Real decreto de 19 de febrero de 1877** por el que quedaba aprobado el adjunto reglamento de ejecución de la ley de 22 de diciembre referente al ensanche de las poblaciones, se darían los primeros pasos de la tutela del Patrimonio Inmobiliario de carácter histórico y artístico. Ya en su artículo 1º se definía al ensanche de las poblaciones la incorporación de los terrenos que constituyeran en *sus afueras en una extensión proporcionada al aumento proporcionado del vecindario a juicio del Gobierno, siempre que aquellos terrenos hayan de convertirse en calles, plazas, mercados, paseos, jardines y edificios urbanos*, siendo promovido por el Ayuntamiento o por los particulares interesados en que se lleve a cabo (art.2º), teniendo un papel relevante el gobernador, que después de oír al Arquitecto de la Provincia y a la Junta Provincial de Sanidad, elevaría el expediente con su informe al Ministerio de Fomento (art.8). Sería la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos, la Academia de Medicina, y demás Corporaciones que el Ministerio de Fomento estimase conveniente, quienes elegirían los proyectos el que resulte más conforme con el programa de ensanche de la población (art.9). La promulgación del **Real Decreto de 12 de marzo de 1878** completaría las medidas anteriores.

### **2.6.3. Las controversias entre las Corporaciones Municipales y el Estado en la tutela del Patrimonio Monumental.**

*- La autorización de los derribos de bienes de interés histórico y artístico por parte de las Corporaciones Municipales: El caso del Arco de Bibarrambla de Granada.*

La demolición del Arco de Bibarrambla en Granada en 1884 representa un punto álgido entre las controversias surgidas entre el Estado y las Corporaciones Municipales en el proteccionismo del Patrimonio Monumental, en este caso un arco nazarí, que se había demolido parcialmente con las políticas municipales de la Revolución de 1868, y cuyos restos en cierta

medida se habían convertido en un verdadero obstáculo para una pretendida modernización de la ciudad, y al mismo tiempo como no para los intereses particulares de una burguesía pujante ávida de un expansionismo comercial. Un gran número de noticias fueron saltando tanto en los periódicos locales como nacionales de la época, que como matizan M<sup>a</sup> Dolores Caparrós y José Castillo se convirtieron en uno de los episodios más interesantes de la protección del Patrimonio Histórico en España en la segunda mitad del siglo XIX. Desde las páginas de La Alhambra se denunciaba la pasiva actitud del Ayuntamiento ante la posible demolición del inmueble, más aún habiendo sido declarado monumento nacional, primando unos intereses generales de higiene y salubridad sobre cualquier otro: (...) *desde 1873, el Ayuntamiento mostró empeño en demoler este sin par monumento, no habiendo retrocedido de su propósito en tantos años, ni perdonado medio ni ocasión para lograr su objeto, hasta que por último la cuestión de higiene y de salubridad le han proporcionado lo que desde el principio se propuso, que era ver por tierra tan respetable edificio. Nada ha podido hacer cambiar la idea constante del Municipio, nada era para él la importancia artística, histórica o arqueológica del monumento; a sus ojos, esta importancia ha pasado desapercibida. Nada ha podido hacer cambiar de idea constante del Municipio, nada era para él la importancia artística, histórica o arqueológica del monumento; a sus ojos, esta importancia ha pasado desapercibida. No ha sido bastante a convencerle de la necesidad de la conservación del edificio, ni los informes de artistas y personas autorizadas, ni los respetables dictámenes de las Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, ni las continuas reclamaciones de la Comisión de Monumentos, ni el que fuera declarado de real orden monumento nacional*<sup>2520</sup>. Se criticaba al mismo tiempo que no había sido el estado de ruina la causa determinante de su demolición: *Se ha hablado con insistencia del estado ruinoso del Arco de Bibarrambla desde 1873, y a la verdad que, de ser cierto, debió hallarse caído al cabo de tantos años; pero no sólo se ha derrumbado, como se temía, sino que sus estribos y toda la obra ha resistido al pico y a la cuña de hierro como roca de granito. Esta ruina no ha sido la razón fundamental para decretar el derribo del arco; porque la arquitectura ha contado y cuenta con sobrados recursos para contener la ruina de un edificio.* En un comentario demoledor Gómez Moreno señalaba la cuestión preliminar, estaban en juego los intereses particulares de la burguesía: *La Puerta era un obstáculo para el desenvolvimiento del comercio y de la propiedad inmediatos, y no había con ella comodidad y seguridad para el transeúnte; era necesario evitar los gravísimos conflictos que podían surgir, y poner a salvo toda responsabilidad de las autoridades, no habiendo otro medio para remediar todo esto sino que el Arco viniera al suelo como tantos otros de su clase.* Incluso se llegó a defender su poca importancia historia y artística: *Al poco tiempo era preciso desacreditar el monumento y no concederle importancia alguna, desvirtuando la opinión y pareceres de los que pedían y velaban por su conservación.* En la *Correspondencia de España* incluso añadía la difícil labor que tuvo que realizar el Ministro de Fomento claudicando ante los intereses municipales:

<sup>2520</sup> GOMEZ MORENO, M. “Breve reseña de las pérdidas que Granada ha experimentado en sus monumentos y obras de arte en que va de siglo” *La Alhambra. Revista decenal de Letras, Artes y Bibliografía*, Año I, 10 de noviembre de 1884, Núm.31, p.6.

(...) empeñado el actual ministro en conservar a todo trance los últimos restos de este monumento, ha tenido que ceder en su empeño en vista de las apremiantes e incesantes reclamaciones oficiales y telegráficas del Gobernador de Granada, quien juntamente con el Alcalde, con el arquitecto provincial y municipal y con el ingeniero jefe de la provincia, han tomado sobre sí toda la responsabilidad de llevar a cabo inmediatamente el derribo de estas ruinas, protestando que de no hacerse esto sin dilación alguna, no respondían del inminente peligro que su conservación pudiera tener para el vecindario<sup>2521</sup>. A pesar de la movilización de la opinión pública, los sectores culturales de la ciudad, incluso con la dimisión de la propia Comisión de Monumentos de Granada e incluso el hecho de haber sido declarado Monumento Nacional, no impidió que fuera definitivamente derribado. En años posteriores sería reconstruido ubicándola de manera descontextualizada en el bosque del Alhambra.

**- El conflicto de titularidad pública entre el Estado y el Municipio en la demolición de las murallas de los centros urbanos. El cambio de dominio a favor de la titularidad pública del Estado y su consiguiente declaración como Monumento Nacional: El caso de las murallas de Tarragona.**

Con motivo del derribo de las murallas de Daroca se publicó en 1876 un artículo en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, en la que su autor se lamentaba de la poca sensibilidad patrimonial que existía sobre la valía de este tipo de inmuebles, más aún cuando sus restos eran utilizados por los ingenieros militares como material de acarreo, por lo que incitaba a que fueran protegidos por las autoridades públicas pertinentes: (...) *Pero lo más extraño es que inteligentes ingenieros del ejército no vacilasen en añadir nuevos derribos de torreones para obtener sillares con que acopiar los materiales destinados á una casa-cuartel, fuerte, levantada en uno de los montes que dominan la población y algunos barrancos y avenidas, con la cual se ha dado pie para que se abuse del mal ejemplo y continúe la irreverente suposición de que cualquiera puede disponer de tan inútiles restos. Ya que no hay medio hábil de reconstruir lo destruido, ni siquiera de reedificar el tejado de cuerpo central de la puerta baja, cuyas barnizadas piezas, artísticamente dispuestas en simétricos labores de diversos matices, coronaban preciosos jarros monumentales de loza, ni se vislumbra el intento de reparar el almenado de los dos más hermosos y característicos muros de la principal entrada de la población; por lo mismo debería disponer autoridad competente que se respete tan preciosos restos, y que nadie, sin incurrir en grave pena, se apodere de un solo sillar, ni de un solo ladrillo, que á la antigua muralla corresponda, ya que ninguno tiene derecho á lo que no le pertenece como propiedad suya, y la misma ciudad menosprecia, ó destruye, con cualquier motivo, interesantes restos de antiguas construcciones, que debiera considerar como venerandos monumentos*<sup>2522</sup>. Al igual que ocurriría en Daroca, en muchas poblaciones españolas se fueron

---

<sup>2521</sup> El fragmento está tomado del artículo “Todavía el Arco de las Orejas” en *La Alhambra, Revista decenal de Letras, Artes y Bibliografía*, 20 de octubre de 1884, Núm.29, p.4.

<sup>2522</sup> *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año IV, N° XIV, Madrid 20 de julio de 1876, pp.285-286.



produciendo una política de sustitución de la muralla por una nueva de expansión urbana.

En 1870 el Gobierno decreta la desmilitarización de la ciudad y con ellos las murallas pasan de ser patrimonio militar a patrimonio civil. Ante el temor de que fueran derribadas, el 12 de agosto de 1870 Hernández Sanahuja envía un escrito a las dos Reales Academias para que le ayudase en la compra del Castillo de Pilatos y envía un informe sobre la importancia de las murallas (CAT/9/7974/22(01) Real Academia de la Historia). El 1 de diciembre de 1870 se pondrían a la venta por parte de la Administración Económica de la Provincia, por lo que la Real Academia de la Historia, previo informe del anticuario enviaría un escrito el 4 de noviembre de 1870 al Ministerio de Hacienda que no derribara las murallas. Por fin, el 5 de enero de 1871 el Ministerio de Fomento informaría a la Real Academia de la Historia que el castillo de Pilatos quedaría fuera de la subasta pública, recayendo la conservación del edificio a la Comisión de Monumentos de Tarragona<sup>2523</sup>. En noviembre de 1883 nuevamente se inicia el debate sobre su conservación, a raíz de la decisión municipal de abrir una abertura en el lienzo de la muralla, iniciándose las obras en diciembre, a pesar de que había sido desautorizado por el Gobernador Civil y la propia Comisión de Monumentos de Tarragona. Una vez enterada la Real Academia de la Historia, enviaría un oficio al Ministro de Fomento, con fecha de 29 de febrero de 1884, firmado por el entonces Director de la Institución, Cánovas del Castillo y el secretario Pedro de Madrazo, en la que se pedía que fuera retirada la propiedad del antiguo conjunto defensivo romano de la Corporación Municipal para que fuera adquirida por el Estado, y al mismo tiempo pasara su custodia a la Comisión de Monumentos de Tarragona: *No quedará del todo asegurado si una Real resolución de carácter definitivo no ampara para lo venidero aquel inapreciable monumento megalítico, y persuadida de que para lograr este apetecido fin el único medio eficaz es segregar dicha muralla del dominio municipal, que la triste experiencia reciente acusa de peligroso para ella, e incluirla en el dominio del Estado, amparador de la riqueza monumental de la Nación(...)*. Probablemente estemos ante un hecho excepcional al pedir la propia Real Academia de la Historia un cambio de dominio con el objetivo claro de tutela pública sobre los intereses particulares de las Corporaciones Municipales, hecho que quedaría definitivamente zanjado con la promulgación de **la Real Orden del 24 de marzo de 1884**, por el que sería segregado la muralla del dominio municipal: *Considerando que el único medio eficaz para amparar la antigua muralla de Tarragona es segregarla del dominio municipal e incluirla en el del Estado*, al mismo tiempo que por **la Real Orden de 2 de septiembre de 1884** quedaban exceptuadas de las medidas

<sup>2523</sup> DE ORTUETA HILBERATH, Elena “Conservar o destruir. La frágil convivencia entre los intereses privados y la protección de la muralla en Tarragona”, *Norba-Arte*, Vol. XXVI, 2006, pp.149-165.

desamortizadoras<sup>2524</sup>. Por virtud de la **Real Orden de 19 de abril de 1887** se dispondría que el Gobernador tendría que dictar con urgencia las medidas más enérgicas para que el Ayuntamiento hiciera desaparecer la verja de hierro colocada en el boquete horadado en la muralla, a costa del presupuesto municipal y bajo la inspección de la Comisión de Monumentos y del Arquitecto Provincial, *dejando en el ser y estado en que se hallaba antes de su violenta perforación, aprovechando los bloques ciclópeos que desprendidos existen aun y cuidando que en lo sucesivo no se ejecute obra alguna en la misma que no sea autorizada por esa Comisión Provincial de Monumentos.*

## **2.7. La encrucijada de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico en la España de Alfonso XII: los límites del derecho de la propiedad privada y el intervencionismo del Estado.**

Durante la etapa de la Restauración se adolece nuevamente de un verdadero régimen jurídico tutelar del Patrimonio Arqueológico, a diferencia de otros países del entorno donde se estaba produciendo algunas novedades propia ya de un incipiente Estado Social. No cabe duda que en el ordenamiento español el derecho de la propiedad privada se va a convertir en un verdadero obstáculo a la hora de diseñarse un verdadero marco jurídico público que pudiera solventar los problemas que se estaban produciendo en torno a los hallazgos arqueológicos, en la medida en que estaba diluido la pertenencia del objeto encontrado. La necesidad de la promulgación de una ley de antigüedades va a ser una constante reclamación durante este periodo, especialmente destacable los artículos de Demetrio de los Ríos, que incitaban al poder público a la intervención del dominio privado resolviendo así los problemas que el carácter absoluto del derecho privado estaba provocado en la evolución de la legislación patrimonial. El erudito sevillano elaboraría un proyecto de ley de antigüedades que marcaría un verdadero antecedente en el marco legislativo de las excavaciones arqueológicas.

### **2.7.1. Una reivindicación a la intervención del Estado en el derecho de la propiedad privada: La concepción pública del Patrimonio Arqueológica en la obra de Demetrio de los Ríos.**

Durante la etapa de la Restauración asistimos entre algunos sectores eruditos de la arqueología española a una verdadera reivindicación a favor de la intervención del Estado en la práctica de las excavaciones arqueológicas, a falta de una regulación que pudiera solventar primordialmente el régimen de propiedad de los bienes arqueológicos descubiertos. Las pésimas experiencias que habían padecido algunos investigadores como Demetrio de los Ríos en sus habituales excavaciones arqueológicas le hicieron reafirmar la insistencia de una verdadera regulación pública, haciendo hincapié en la posibilidad de aplicar algunas de las novedades intervencionistas que se estaban practicando

---

<sup>2524</sup> REMESAL, José; AGUILERA, Antonio y PONS, Lluís, *Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, Cataluña, Catálogo e Indices*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2000, p.75.

en otros sectores del ordenamiento jurídico, como era el caso de la expropiación forzosa. De esta manera en un artículo publicado en la revista la Ilustración española y americana titulado *“Itálica. Últimos descubrimientos de 1874”*, abriría el camino de la tesis que cuajaría con el tiempo en el ordenamiento español, la consideración de que el Patrimonio Arqueológico fuese considerado dominio público. En algunos fragmentos del referido artículo se vislumbra ya la impronta de la tesis renovadora en la doctrina jurídica de la quiebra del carácter absoluto del derecho de la propiedad privada, que iría cuajando en el ordenamiento del Patrimonio Monumental, y especialmente en el Patrimonio Arqueológico: *Lejos de nuestro ánimo la disolvente idea de negar la importancia del sagrado derecho de propiedad, base reconocida de todo derecho: más como quiera que aquel es puramente individual, por su origen y por su naturaleza, y muchas veces se hallan frente a frente el derecho del individuo y el derecho de la sociedad, de aquí es que todos los legisladores, al llegar este caso, sacrificando el interés secundario del primero al interés principalísimo de la segunda, han dictado disposiciones en las cuales se prescribe la expropiación forzosa por causa de utilidad pública, procediendo, de acuerdo con las leyes naturales, y con arreglo a aquellas otras que nacen y se originan en la existencia y de las transacciones sociales. De ahí que reivindicaría la aplicación de la legislación de la expropiación forzosa en la regulación de las excavaciones arqueológicas: (...) si para satisfacer el interés o la utilidad de un pueblo, utilidad e interés puramente materiales, ha encontrado el legislador motivo bastante para quebrantar el derecho de la propiedad, que al mismo tiempo garantiza, ¿Cuánto más justificada no sería la expropiación forzosa, cuando quienes la exigen no son el interés o la utilidad materiales, sino el interés más alto, más noble, mas levantado de la ciencia; interés y utilidad universales?, más aún por la importancia que la propia arqueología representaba para el conocimiento del pasado de una sociedad: No nos creemos obligados a demostrar que siendo la ciencia arqueológica el fundamento de mayor importancia para la Historia, todo cuanto contribuya a enriquecer a aquella ciencia es de utilidad pública. Bastan solo las consideraciones apuntadas para comprender, sin género alguno de duda, que el descubrimiento y la conservación de los monumentos artísticos de las edades pasadas son de notoria utilidad pública, por lo que el carácter de dominio público de los bienes arqueológicos e incluso los propios monumentos históricos estaría claramente fundamentando, como había ocurrido en el caso de la minería: y como tales, que ante ella debe ceder la utilidad pública, hartos secundarios en tan trascendental concepto. Pero no es nuestro propósito el imponer ya al Estado, ya a las Corporaciones provinciales o municipales la onerosa y muchas veces irrealizable obligación de expropiar por causa de la utilidad de la ciencia multitud de edificios o terrenos, en los cuales existen monumentos artísticos: nosotros aspiramos únicamente a que así como se han reputado siempre las minas propiedad del Estado, háyase o no verificado su invento en terreno propios de aquella entidad jurídica, se consideren de igual suerte los terrenos artísticos que encierra en su seno el pródigo suelo de nuestra España; esto es: que se declaren desde luego propiedad del Estado, o lo que es lo mismo, patrimonio de todos los españoles, no ya sólo los monumentos conocidos, sea cualquiera su índole y naturaleza, sino aquellos otros que el acaso o las investigaciones científicas*

*descubran en lo sucesivo. Pues si no es vejatoria para el derecho de la propiedad la limitación que hace al Estado dueño legítimo del subsuelo, no podrá por el más descontentadizo o por el más apasionado de aquel derecho tacharse de vejatoria esta otra limitación de idéntico orden, que pone a salvo de la ignorancia o de la codicia los monumentos de la antigüedad, en los cuales se halla escrita con indelebles caracteres nuestra historia. Nuestras aspiraciones se reducen a aquella racional declaración, en cuya virtud pertenece al Estado el subsuelo para la explotación y laboreo de las minas, se haga extensiva también para el descubrimiento de antigüedades, con la única diferencia de que mientras en aquellas la explotación y el laboreo corresponde a los particulares, mediante la oportuna autorización y demás requisitos que previenen nuestra legislación minera, en éstos, cuantos objetos se descubran sean de hecho y de derecho de la exclusiva pertenencia del Estado.*

### **2.7.2. La autorización de las excavaciones arqueológicas de los particulares.**

Durante el periodo de la Restauración asistimos a un hecho trascendental en el ámbito de la arqueología española, como fue la iniciativa privada en las excavaciones arqueológicas, bien por las propias individualidades que fueron surgiendo en el ámbito de la arqueología científica, como fue el caso de Bonsor, o de las propias Sociedades Arqueológicas y Sociedades de Excursionistas que tuvieron como objetivo primordial la práctica de excavaciones arqueológicas. No cabe duda este hecho supondría desde una perspectiva legal, ahondar aún más en las lagunas legales que en estos años seguía existiendo en torno a la cuestión de la propiedad de los bienes descubiertos por las propias sociedades arqueológicas o incluso la obligación de conseguir la correspondiente autorización administrativa para realizar excavaciones. En cierta manera se seguiría aplicando el reglamento de 24 de noviembre de 1865, por el que la Comisión de Monumentos sería la institución administrativa que informaba sobre la idoneidad de autorizar la práctica de excavaciones arqueológicas a los particulares. Se conoce un amplio número de expedientes de la Real Academia de la Historia donde se desautoriza la práctica de excavaciones arqueológicas por parte de los particulares en este momento, como podemos contemplar en los oficios que enviaría la Comisión de Monumentos Históricos y Artístico de Granada para que fueran paralizadas las que se estaban efectuando en la localidad de Atarfe, especialmente por la falta de asignación presupuestaria y la consiguiente imposibilidad de dirigir las excavaciones arqueológicas, *cumpliendo con uno de los objetivos principales de su instituto, ha acordado dirigirse a V.E. , que se digne comunicar las órdenes oportunas para que no se pueda hacer excavaciones en Atarfe sin que la Comisión de Monumentos de Granada tenga en ellas la dirección que previene el Reglamento aprobado en 24 de noviembre de 1865, y para que los objetos arqueológicos que allí se encuentren el destino que el mismo reglamento expresa, o el que parezca mejor al Gobierno de S.M.* Sin embargo, se conserva en la documentación de la Real Academia de la Historia algunos oficios solicitando la autorización para excavar, sin la tutela

de la Comisión Provincial de Monumentos. En **el Oficio del 14 de mayo de 1878 de José Pella Y Forgas**, académico de la Historia, para ser autorizado a excavar en varias localidades de Ampurias, fundamentado el motivo de ello, las investigaciones personales que estaba realizando sobre el territorio catalán para que no fuera olvidado por la historia general, proponiendo al mismo tiempo que correrían por su cuenta los gastos, deseando *efectuarlas a la par que sin dependencia alguna de la Comisión de Monumentos de la Provincia, con la autorización bastante para no encontrar obstáculos, por parte de las autoridades municipales, sino la protección compatible con el respeto a la propiedad particular, y en este concepto me atrevo a suplicar a la Academia se sirva facilitarme una autorización directa, o para lograr las correspondientes órdenes del Gobernador de Gerona, al objeto indicado*. En el Informe favorable de la Real Academia de la Historia, fechado el 23 de junio de 1878, se vuelve a precisar la capacidad investigadora del académico, por lo que se le autorizaría las pertinentes excavaciones arqueológicas que necesitara a la hora de reconstruir la historia local, subrayándose que lo realizaría *corriendo de su cuenta los gastos y respetando la propiedad particular como no puede ser menos, al mismo tiempo que sin inmediata dependencia a la Comisión de Monumentos de la provincia*.

### **2.7.3. La regulación de las excavaciones arqueológicas por las Sociedades de Excursionistas y las Sociedades Arqueológicas.**

Con la llegada de la Restauración va a surgir una gama de instituciones privadas con el objetivo primordial de tutelar el Patrimonio Arqueológico, Su regulación jurídica estaría fundamentada en el derecho de asociación fundamentada en el artículo 13 de la constitución de 1876, por lo que se garantizaría a todos los españoles el derecho a reunirse y asociarse pacíficamente para todos los fines de la vida humana que no fueran contrario a la moral pública. Sin embargo, el propio Martínez Alcubilla señala como ya anteriormente a esta medida constitucional se habían creado sociedades de carácter científico, como la Real Orden de 1º de junio de 1850, que establecería reglas para la autorización de las sociedades científicas, facultando a los Gobernadores para conceder el permiso de reunirse y previniendo que el Gobierno no autorizará a aprobará ningún cuerpo científico libre, sin que previamente publique trabajos importantes sobre el objeto de su instituto. El movimiento excursionista fue uno de las manifestaciones culturales más características de finales del siglo XIX. Cataluña sería la verdadera pionera de este tipo de instituciones, salido de las filas del movimiento cultural de carácter nacionalista, la *Renaixença*, que afectado por la desaparición de múltiples monumentos históricos por la dejadez de la administración, crearían en 1876 la *Associació Catalinista de Excursions Científiques*, cuyo presidente, Antoni Aulèstia i Pijoan (1849-1908), plantearía en sendos artículos consideraba que era necesario suplir la ineficacia y el abandono que tenía el Estado a Cataluña con la fundación de una organización o institución de



carácter privado que se ocupase de la conservación de los monumentos catalanes. Dos años después de su fundación, en 1878, ya se publicaría el primer *Album Pintoresch Monumental de Catalunya*, donde ya se manifestaba la posible pérdida de algunos importantes monumentos, como los monasterios de San Cugat del Vallés, Pedralbes, Santa Creus, San Pedro de Rodas, la iglesia de San Miguel de Terrasa y la Catedral de Lérida. Otra asociación de este tipo, la *Associació d'Excursions Catalana*, que nacería el 18 de octubre de 1878, que llevaría a cabo tareas paralelas de investigación, catalogación y publicaciones, contando incluso con delegaciones provinciales. Plantearon entre sus socios emitir una suscripción para restaurar algún monumento, como el caso de San Miguel de Terrasa. En 1890 ambas entidades se fusionarían en el *Centre Excursionista de Catalunya*, cuyo objetivo era la de divulgar la cultura catalana<sup>2525</sup>. El papel de estas asociaciones radicaba primordialmente en el papel jugado en el conocimiento del patrimonio, teniendo entre sus objetivos, el estudio, la conservación y la difusión de todos los aspectos relacionados con la historia, el arte y las tradiciones culturales. Entre sus actividades cabe mencionar la organización de visitas a los centros de interés arqueológico, artístico o histórico. Estas sociedades elaborarían publicaciones periódicas, que informaban de la existencia de algunos bienes patrimoniales, que de otra manera no se hubieran conocido, destacando *El Excursionista*, el *Boletín de la Asociación de Excursiones de Cataluña* y especialmente el *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*. Ya en 1893 se redactó el primer reglamento creada por un grupo de personalidades de raigambre cultural, bajo la dirección de Jerónimo López de Ayala<sup>2526</sup>.

El carácter nacionalista de estas instituciones queda patente en las conferencias inaugurales de algunos de sus presidentes, recogido por Cortadilla Morall. Así, en 1882, en la sesión de la *Associació d'Excursions Catalana*, su presidente Joaquim Riera resaltó que el interés de los excursionistas por los objetos curiosos del pasado no respondían a un afán de mera curiosidad o de poseer lo que otros no tenían, sino que era del mismo tipo que profesaba por los nombres gloriosos del pasado, que santificaban la tierra. En la misma línea, Antoni Aulestia i Pijoan, manifestaría en 1885 que el estudio de la antigüedad era condición esencial de los organismos del moderno renacimiento patrio, entre los cuales se encontraba el excursionismo<sup>2527</sup>. Como balance del papel que tuvieron estas asociaciones de excursionistas en el ámbito de la arqueología, Cortadilla Morral ve en este movimiento una prefiguración de la

---

<sup>2525</sup> Sobre el movimiento excursionista catalanes, CORTADELLA MORRAL, J. *La investigación arqueológica en las asociaciones excursionistas catalanas (1876-1915)*, en MORA, G y DIAZ-ANDREU, M. *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*. Málaga, 1997. pp.273-285.

<sup>2526</sup> RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, G. *La sociedad española de Excursiones. Sus primeros pasos para divulgar la arqueología (1893-1936)*, en MORA, G. y DIAZ-ANDREU, M. *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*. Málaga, 1997, p.287.

<sup>2527</sup> CORTADELLA MORRAL, J., 1997, pp.278-279.

Mancomunitat, que tanto apoyo prestaría posteriormente a la protección histórico-artística, además de que no duda de que sus trabajos prepararon la formación de entidades oficiales: el Server de Conservació i Catalogació de Monuments (1914) y el Server d'Excavacions Arqueològiques (1915), ambos dependientes del Institut d'Estudis Catalans. A partir de 1904 se puede afirmar que comenzó a decaer este tipo de institución cultural, especialmente en el campo de la arqueología.

La Sociedad Española de Excursiones fue otro de los referentes digno de mencionar en el ámbito hispano, nacida en Madrid en 1893 de la mano los intelectuales Enrique Serrano Fatigati, ingeniero y doctor en Ciencias, llegando a ser Secretario de la Academia de Bellas Artes y Jerónimo López de Ayala, que llegaría a estar al frente de la Biblioteca Nacional de Madrid, formando parte de la Comisión de Antigüedades. el objetivo de esta institución al fundarse fue interdisciplinar, ya que abordaban todo tipo de temas (científico, histórico, artístico y literario), hasta que posteriormente en 1908, limitaría más sus actividades bajo la denominación de Sociedad de Viajeros artistas y arqueólogos. Se publicaría un Boletín, cuyo primer número saldría a la calle en 1893, que salieron a la calle ininterrumpidamente hasta 1899, en la que se publicaron solamente diez números. La primera excursión que se realizaría sería a Alcalá de Henares el 12 de marzo de 1893, a las que siguieron un gran número por las tierras castellanas. En el Primer Reglamento, fechado el 1 de febrero de 1893, se pedía a los excursionistas que realizasen una serie de actividades, entre las que cabe destacar, la popularización de las regiones y localidades visitadas, fomentar el amor a los monumentos y coadyuvar a su conservación, poniéndose si así fuese oportuno relación con la Comisión de Monumentos y reproducir los objetos y monumentos notables por medio del dibujo y la fotografía. En 1900 la Sociedad diseñaría unas “Papeletas para el inventario monumental de la Sociedad Española de Excursiones” para que lo rellenaran aquellos excursionistas que quisieran dar noticias de algún hallazgo o descubrimiento de objetos arqueológicos<sup>2528</sup>.

Las Sociedades Arqueológicas eran instituciones culturales de carácter privado, muy identificado con el espíritu burgués de la época, financiadas por sus propios miembros, participaron, espoleadas por sentimientos patrióticos, en la protección y estudio del rico patrimonio histórico-artístico que España atesoraba y que había sido seriamente dañado por las guerras y desestabilización política de aquellos momentos, así como amenazado por la ola de intervención extranjera con la consecuente salida del país de importantes bienes del patrimonio. Fueron, por lo tanto, un importante complemento a las instituciones de la Administración que siempre vio con buenos ojos estas iniciativas y las alentó en la medida de sus posibilidades. Así, muchos de ellos formaron parte a su vez de las Comisiones de Monumentos e incluso se

<sup>2528</sup> RUEDA MUÑOZ DE SAN PEDRO, Gracia, 1997, pp.287-293.

encontraban académicos correspondientes de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia. Sus trabajos eran publicados en boletines, revistas y memorias creadas al efecto, reflejando las ideas propias de la Restauración de considerar a los monumentos como testimonios históricos y artísticos del pasado<sup>2529</sup>. Entre las Sociedades Arqueológicas más importantes merece especial mención la Sociedad Arqueológica Tarraconense, fundada en 1844 por Juan Francisco Albiñana de Borrás; la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa (1877), la Sociedad Arqueológica Lulliana (1881) y la Agrupación Arqueológica de Vich (1882). La Sociedad Arqueológica de Vich quedó constituida el 28 de diciembre de 1882, habiendo surgido a raíz del descubrimiento de un templo romano al derribar el castillo de Montcada, siendo adquirido por Josep Serra, archivero de la ciudad de Vic y el canónigo Cullel, quienes decidieron fundar dicha institución para salvaguarda del edificio romano. En las Baleares se funda en 1881 la Sociedad Arqueológica Lulliana, fundada en 1881 bajo los auspicios de Bartomeu Fena i Perelló, que a partir de 1885 publicaría la revista *Boletín de la Arqueología Lulliana* y la Sociedad Arqueológica Ebusitana de 1903, que realizó algunas actividades de excavaciones como la de la necrópolis de Puig de Molins. En sus estatutos se precisaba algunos de los objetivos de estas instituciones: recoger y catalogar obras de arte y arqueología con el fin de tomar un museo, visitar los monumentos de Baleares y velar por su conservación, celebraciones de conferencias sobre arte y arqueología y organizar congresos y exposiciones. En el núcleo levantino surgió la Sociedad Arqueológica Valenciana (1871-1883/1886), a la que pertenecieron eruditos de la talla de José Vilanova y Viera, hermano del impulsor de la arqueología prehistórica en España, que había realizado una amplia recopilación de inscripciones romanas de la provincia y el descubrimiento de un gran número de yacimientos prehistóricos<sup>2530</sup>. Otras Sociedades digno de mencionar serían las de Pontevedra (1894-1937) y la de Toledo (1901). En el ámbito andaluz se contó con un importante número, especialmente en el foco sevillano, como fue el caso de la Sociedad Arqueológica de Carmona, fundándose el 22 de mayo de 1885, o en la propia capital. Entre los fines que planteaba la Sociedad Arqueológica de Carmona aparece reflejado en la propia memoria resumen de sus actividades: Primero, reconocer y estudiar las muchas antigüedades que esta población encierra; segundo, llevar a cabo excursiones, no sólo a los despoblados de los alrededores, sino que también a otros puntos fuera del término rural de Carmona, aunque sin traspasar nunca los límites de Osuna, Ecija, Lora del Río, Pedroso, Alcalá del Río, Alcalá de Guadaira, Arahal y Marchena. En tan grande extensión de terreno, sembrado por doquier de restos antiguos de todas clases, no faltarán seguramente, ocasión y motivo para los

---

<sup>2529</sup> Sobre las Sociedades Arqueológicas, MAIER ALLENDE, J. *Jorge Bonsor (1855-1930). Un académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y la Arqueología española*. Madrid, 1999, pp.77-99.

<sup>2530</sup> GOBERNA VALENCIA, M<sup>a</sup> V. "La Sociedad Arqueológica Valenciana" *Archivo de Prehistoria Levantina*, XVI, 1983, pp.575-608.

trabajos a que la Sociedad se dedica. Tercero, hacer excavaciones y estudios prácticos en los sitios más convenientes; cuarto, procurar todo los medios posibles la conservación de los monumentos antiguos.

## **2.8. Un régimen jurídico de aduanas en la exportación e importación de obras de artes como única tutela del tráfico comercial del Patrimonio Monumental.**

A lo largo del periodo de la Restauración la regulación de la exportación e importación de las obras de arte no sufrió ningún cambio aparente, en una realidad en la que se unía la desidia de las autoridades públicas, el mercado fraudulento y la falta de una disposición legislativa que contuviera la pérdida del Patrimonio Monumental. Solamente podemos resaltar una disposición más cercana al ámbito del derecho de aduanas que a una clara protección del Patrimonio Monumental como fue la promulgación de la **Real Orden de 17 de octubre de 1876**, por la que se establecía la franquicia de derechos de Aduanas para las pinturas que sean Obras de arte y se devuelvan del extranjero, disposición que había promulgada gracias a la instancia que había expedido Doña Angela Tegeo de Ortiz por el que solicitaba que no se cobrasen derechos por la reimportación de dos cajas con cuadros al óleo que se iban a devolver desde París por invendibles y que estaban retenidas en la Aduana de Irún. La petición iba acompañada a su vez de un certificado del Vicecónsul de España en París, en el que se exponía que los cuadros habían sido expuestos en un establecimiento de ventas sin resultados, y se habían reenviados a España. Partiendo de la base de que se consideraba que la exportación de cuadros, obras de arte de autores antiguos y modernos, bien haberlos utilizado simplemente para exponerlos, bien para su venta, o para preservarlos por sus dueños de algún daño, había sido origen de diferentes expedientes que se habían resuelto aplicando por equidad la franquicia de derechos, a pesar de que se hubiera omitido la presentación de las pinturas en la Aduana para registrar su salida. De esta manera se establecería que no fueran cobrados derechos por los cuadros que habían originado dicho expediente, previo reconocimiento por la Aduana y comprobación y conformidad de sus asuntos con los que expresa el certificado del Vicecónsul de España en París, que había presentado la propia interesada (art.1º), al mismo tiempo que fuera establecido como regla general una franquicia de derecho de Aduanas para las pinturas que fueran obras de arte y fueran devueltas del extranjero, siempre que hubieran sido exportadas con factura de la Aduana y en la reimportación se citara este documento o se presentase su duplicado para hacer las debidas comprobaciones, estableciéndose como pena por la falta de estos requisitos 2 pesetas y 50 céntimos por cada pintura (art.2º).

*- La tutela pública del Patrimonio de la Corona.*

Con la llegada de la Restauración se inicia una nueva política de administración de los bienes patrimoniales que habían pertenecido a la Corona, por lo que se van a ir regulando una serie de disposiciones legislativas como fueron el **Real Decreto de 14 de enero de 1875** sobre devolución al Patrimonio de la Corona de los bienes no vendidos y la Ley del 26 de junio de 1876 por el que se dispuso fueran devueltos al patrimonio de la Corona, los Palacios y Sitios Reales enumerados en el artículo 1º de la Ley de 12 de mayo de 1865, con excepción de los que han sido enajenados o dedicados a servicios públicos (art.1º). Correspondería además al Patrimonio de la Corona los patronatos de la iglesia y convento de la Encarnación, la iglesia y hospital del Buen Suceso, la iglesia de San Jerónimo, el Convento de las Descalzas Reales, la Real Basílica de Atocha, la iglesia y colegio de Santa Isabel, la Iglesia y colegio del Loreto, la iglesia y hospital de Nuestra Señora de Montserrat, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el de las Huelgas de Burgos, el Hospital del Rey de Burgos y el convento de Santa Clara de Tordesillas (art.2). Durante esta etapa se va a ir produciendo unas medidas de cesión de algunos bienes de interés histórico y artístico a corporaciones públicas que habían pertenecidos a la Casa Real. En virtud de la **Ley de 22 de junio de 1876** sería cedido al Ayuntamiento de Madrid el Jardín de Buen Retiro mediante un canon anual de 5.000 pesetas (art.1º), al mismo tiempo que se autorizaba al Gobierno para permutar con el propio Ayuntamiento de Madrid el Palacio de San Juan, enclavado en dicho jardín, por un edificio donde podría ubicarse el Museo de Ingenieros, que estaba en ese momento situado (art.2). El Ayuntamiento no podría enajenar en ninguna circunstancia en todo ni en parte dicha posesión, y si solo podría destinarlo como esparcimiento y recreo de los habitantes de la ciudad, con la obligación de hacer en ella las mejoras convenientes además de su conservación (art.3º). En caso de que no se cumpliera estas obligaciones, el Estado volvería a recuperar el dominio absoluto sobre ella (art.3). Posteriormente sería promulgada la **Ley de 13 de junio de 1878** por la que se segregaba del patrimonio real la iglesia de San Jerónimo. La iglesia sería objeto de una verdadera política tutelar de conservación del inmueble por parte de la Real Academia de la Historia. De esta manera el académico Pedro Sabau dirigió un oficio el 3 de junio de 1878 a los académicos de la Historia para que redactaran un informe sobre la conservación del monumento. El Informe de la Real Academia de la Historia estaría elaborado el 21 de junio de 1878 en el que declaraba que *no hay mejor manera de conservar sus monumentos arquitectónicos, que destinarlos a algún objeto útil. Los edificios no se levantaron nunca con el mero fin de contemplarlos y examinar su belleza; tienen su destino primordial que determina su existencia, por lo que nada puede hacerse mejor para la conservación de la antigua iglesia de San Jerónimo que destinarla de nuevo al culto, y como es premisa al mismo tiempo que haya recursos para sostenerlos, podría aconsejarse al Gobierno que instalara en ella la parroquia del nuevo barrio que se está edificando en el Retiro al cual serviría comodísimamente por su céntrica posición.*



### 3. Una incipiente intervención en la tutela del Patrimonio Monumental en la Regencia de María Cristina (1885-1902).

#### 3.1. La crisis del 98 y el revisionismo de la identidad nacional como fundamento de una nueva revisión del Patrimonio Nacional como bien de interés público.

La crisis del 98 se convierte en el telón de fondo de la situación cultural española<sup>2531</sup>. La exposición de las obras de Goya sería promovida como uno de los acontecimientos artísticos de orgullo nacional, ya que sus promotores eran conscientes de que el pintor aragonés encarnaba la veta popular y racial del genio hispánico<sup>2532</sup>. Al igual que había ocurrido en los periodos anteriores, la Regencia de María Cristina va a medir marcada por una verdadera institucionalización de la política cultural, especialmente por el fomento público del cultivo de las artes y de las letras. El arte como instrumento vital del régimen político sigue siendo una constante al ser un vehículo transmisor de la configuración de la identidad del Estado y las ideologías nacionalistas que se iban fraguando en los sectores más conservadores de la sociedad. En la Exposición de Motivos del Real decreto de 29 de agosto de 1889 aprobando el Reglamento de Exposiciones Generales de Bellas Artes aparece recogido el interés gubernamental por la protección de las artes y su necesidad de reglamentar la manera de difundir las creaciones que los artistas contemporáneos españoles estaban realizando, incluso adquiriendo aquellas obras que podían ser consideradas dignas de ser propiedad nacional: *Todos los Gobiernos han procurado con noble afán el engrandecimiento del arte patrio, acrecentándose este empeño desde que por obra del tiempo y el progreso vino el Estado a reivindicar el poder y prestigio que antes compartían distintos organismos sociales. Al calor de esta idea, y bajo la tutela del Estado, nacieron las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes que tan poderosamente han contribuido a crear una pléyade de artistas por quienes, con razón, se enorgullece la Patria. Pero los anteriores reglamentos de Exposiciones, todos inspirados en el más laudable celo, han tenido por base criterios distintos, siendo esta diversidad de origen causa de que hoy no haya modo de conocer el grado de influjo ejercido por aquellos certámenes en la marcha y desarrollo del arte nacional. Unos reglamentos extremando el principio de la injerencia oficial, tan difícil de precisar en materia artística; otros adoptando ideas más expansivas, no llevadas a su término lógico (...) La voz pública y el interés profesional solicitan constantemente la protección del Estado; más dada la situación del Tesoro, que tan sensibles economías impone, no puede fundarse exclusivamente al otorgamiento de recursos pecuniarios, ni bastarían éstos al logro del deseado progreso, porque el dinero sólo no crea arte ni artistas, ni se alcanzaría otra cosa que seguir llenando de obras, en su mayoría medianas, los edificios nacionales. Las Bellas Artes, según su índole privilegiada y soberana, han menester como principal apoyo en las esferas oficiales un criterio expansivo y genuinamente liberal, merced a*

<sup>2531</sup> Martínez Ortiz, Pascual *Arqueología y arte antiguo en el catálogo monumental de la provincia de Murcia (1905-1907)*. Discurso de ingreso en la Real Academia de San Fernando de Madrid,

<sup>2532</sup> Aparece insertada en la Gaceta de Madrid, CCXXXIX, Núm.153, Tomo II, p.23.

*cuya incontrastable virtud pueda cada artista conquistar lo que merezca por la potencia de sus facultades; siendo todos legalmente amparados con el apoyo que facilita y allana el camino del triunfo, y ninguno arbitrariamente ensalzado por el favor que hace sospechoso el mérito de quien lo recibe (...). De esta suerte, mediante el estímulo de adquisiciones de obras que puedan efectuarse con sujeción a cada presupuesto general, el Estado coloca a todas las tendencias, escuelas, grupos e individualidades en iguales condiciones de progreso, y con los mismos medios, no ya para expresar, sino hasta para realizar sus aspiraciones*<sup>2533</sup>.

La pérdida del Patrimonio Monumental vuelve a ser un hecho indiscutible en este periodo, reclamándose por algunos eruditos la intervención del Estado, como fue el caso de Amador de los Ríos<sup>2534</sup>, que en 1899 en las páginas de la Ilustración Española y Americana ya puntualizaba el peligro que conllevaba la modernidad en las huellas de la memoria histórica: *A medida que la civilización avanza y las poblaciones se modernizan, los testimonios arqueológicos y las memorias históricas van poco a poco desapareciendo, y los monumentos erigidos en pasadas edades son destruidos por la codicia, por el abandono y por la indiferencia; factores todos que, aislada o conjuntamente, salen siempre al encuentro de quien pretenda en nuestros días de cierta naturaleza*<sup>2535</sup>. Aunque no fuera la respuesta rápida que esperaba estos intelectuales, no cabe duda que el Estado intentó responder con la reestructuración de una nueva organización administrativa con la promulgación del **Real decreto del 7 de mayo de 1886**, que supuso la desaparición del Ministerio de Fomento, al mismo tiempo que surgían otros dos, el Ministerio de Instrucción Pública y de Ciencias, Letras y Bellas Artes, y Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. El Ministerio que desaparecía se había denominado de Fomento desde el 20 de octubre de 1851, por obra del gobierno de Bravo Murillo, intentándose reformarse durante el gobierno de Sagasta en el inicio de la regencia de María Cristina a raíz del real decreto de 7 de mayo de 1886 aunque no lo llevaría a efecto<sup>2536</sup>. A raíz del Real decreto de 18 de abril de 1900 nacería el nuevo Ministerio de Instrucción Pública, que tendría como competencia todo lo relativo a Instrucción Pública, a saber: Consejo de Instrucción Pública, personal y material de la enseñanza pública de toda las clases, inspección y fomento de la enseñanza privada en todos sus grados, fomento de las Ciencias, de las Letras y de las Bellas Artes, Archivos,

---

<sup>2533</sup> Colección Legislativa de España, Segundo Semestre de 1889, Tomo CXLIII, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1890, pp.960-961; Gaceta de Madrid, 3 de septiembre de 1889).

<sup>2534</sup> Sobre el papel que jugó Rodrigo Amador de los Ríos en la tutela del Patrimonio Monumental cabe destacar ZAPATA PARRA, José Antonio “Rodrigo Amador de los Ríos: la defensa del patrimonio y la arqueología” *Revista ArqueoMurcia, la revista de arqueología de la Región de Murcia*, Nº 2, julio de 2004.

<sup>2535</sup> AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo “El castillo de Pioz en la provincia de Guadalajara”, *La Ilustración española y americana*, nº XXXIX, Madrid, 18 de septiembre de 1899.

<sup>2536</sup> AURELIO GUAITA “La competencia del Ministerio de Fomento, 1832-1931”, en *Actas del IV Symposium de la Historia de la Administración*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1983, pp.349-399.

Bibliotecas y Museos, Construcciones Civiles y Contabilidad correspondientes a estos ramos. Será asimismo de la competencia de este Ministerio cuanto actualmente constituye la del Instituto Geográfico y Estadístico (art.2º). El primer titular de la cartera sería Antonio García Alix, quien paradójicamente este político murciano ha pasado a la historia por ser uno de los impulsores de la renovación de la administración de la enseñanza a principio de siglo<sup>2537</sup>, olvidándose en casi todos los casos de su papel en la configuración de un sistema tutelar público del Patrimonio Monumental, ya que promovería el primer proyecto de ley sobre exportación de obras de arte. Con la promulgación de la **Real orden de 1º de junio de 1900 se aprobaría el Reglamento para el régimen interno de dicho Ministerio**, la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se comprenderá de cuatro secciones: 1º De universidades e institutos; 2º De Primeras Enseñanzas y Universidades; 3º De Bellas Artes y 4º. De Construcciones Civiles y Escuelas especiales (art.1º). La publicación del **Real Decreto de 20 de julio de 1900** significaría un paso importante en el organigrama estatal, al crearse la Dirección General de Bellas Artes, perteneciente al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y al mismo tiempo sería suprimida la Escuela de Diplomática siendo sustituido por el llamado Cuerpo Facultativos de Archiveros, Bibliotecarios, y los denominados a partir de este momento, Arqueólogos (anteriormente Anticuarios). El Ministerio de Instrucción Pública, separado del de Fomento, en palabras de Juan de la Cierva, se había convertido en una verdadera Manigua de legislación, incoherente, contradictoria y confusa (...) Me propuse codificarla, y para ello di órdenes y comencé desde luego a trabajar e impulsar el trabajo de los demás<sup>2538</sup>.

### **3.2. La carencia de una regulación jurídica del patrimonio monumental eclesiástico durante la regencia de María Cristina (1886-1905).**

Al igual que en las etapas anteriores, la tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico siguió siendo una de las asignaturas pendientes que debía de resolver el Gobierno reformista de María Cristina, más aun cuando seguía representando muchos de sus bienes la propia identidad de la nación. A pesar de la pervivencia de la Real Orden de 10 de abril de 1866, se iría fraguando la necesidad de promulgar una nueva ley de tutela de bienes eclesiásticos del Patrimonio Monumental que solventara las cuestiones jurídicas que no habían sido claramente resueltos, como la capacidad jurídica de los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico para vender sin ningún tipo de limitación, la intervención estatal sobre los mismos, y la participación de las propias autoridades eclesiásticas en el régimen tutelar de este

<sup>2537</sup> La amplia disposición normativa existente bajos los auspicios del propio García Alix están recogidas en un libro que el propio político murciano recogió con el título de Disposiciones dictadas para la reorganización de la enseñanza publicada en 1900.

<sup>2538</sup> CIERVA Y PEÑAFIEL, Juan de la *Notas de mi vida*. Instituto Editorial Reus, Madrid, 1955, p.63.

Patrimonio. Algunas ventas fraudulentas por parte de párrocos e incluso Cabildos Catedralicios se encontrarían con la oposición de las Corporaciones Académicas y la propia opinión pública lo que comenzaba a reconsiderarse. La restauración de bienes eclesiásticos seguiría siendo motivo de debate de la propia gestión institucional, entre las autoridades civiles y las eclesiásticas. La propia Iglesia intentaría a dar una respuesta al despojo patrimonial, como fue el caso de la fundación de los llamados museos episcopales, especialmente entre los obispos catalanes.

### **3.2.1. La pervivencia de la Real Orden de 10 de abril de 1866.**

Durante el régimen de María Cristina se vuelve a asistir a un verdadero despojo del Patrimonio Monumental Eclesiástico, a pesar de la pervivencia de la Real Orden de 10 de abril de 1866, siendo criticada por algunos eruditos como Rodrigo Amador de los Ríos por lo que instaría al Ministro de Fomento para que lo prohibiera, ya fuera a través de una promulgación de ley, o a través de la compra de las propias reliquias para el Museo Arqueológico Nacional. Una de las ventas más conocidas de este periodo que provocó una airada reacción de la opinión pública fue la de las tres tablas de Hans Memling procedentes del monasterio de Santa María la Real de Nájera (La Rioja), que se hallaba abandonada en la caja interior de un órgano en la tribuna del coro alto, a los pies de la iglesia abacial<sup>2539</sup>. Las piezas fueron vendidas por 1.500 pesetas en 1886 a un anticuario de Madrid por el propio párroco, bajo el pretexto de querer restaurar el coro de la iglesia. Gracias a la publicación de un folleto titulado “una joya de Nájera en Bélgica” en el periódico *La Rioja*, escrito por el erudito local, Constantino Garrán, se conoce los entrecijos que tuvieron que hacer en la operación mercantil del bien de interés histórico-artístico, hasta que pudo ser trasladada por ferrocarril a Madrid<sup>2540</sup>. Una vez en Madrid, el anticuario madrileño se lo vendería a un marchante judío, M. Salomón de Amsterdam, por el precio de 25.000 pesetas, quien lo volvió a vender a Ch. Stein, un marchante de París, por la cantidad de 40.000 francos. Unos meses después, se hicieron gestiones por el historiador A. J. Wauters para que fuera adquirido por el Museo de Bruselas, que se frustró por falta de fondos, por lo que sería ofrecido al Museo de Amberes por la suma de 240.000 francos, que fue comprada por la suscripción pública de los vecinos de la ciudad holandesa, y pagada en cuatro plazos. En principio la operación se había realizado sin ningún tipo de impedimento por parte de las autoridades públicas, ni tampoco las eclesiásticas, por lo que se puede contemplar la libre disposición que un párroco había tenido para vender una obra de arte sin ningún tipo de obstáculos, a pesar de que existían disposiciones legales al respecto que se lo

---

<sup>2539</sup> FERNANDEZ PARDO, Francisco “Los expolios del Camino de Santiago” en *Catálogo de la Exposición las tablas flamencas en la Ruta Jacobea*, Septiembre-Noviembre, Madrid, 1999, Fundación BSCH, pp.205-209.

<sup>2540</sup> “Una joya de Nájera en Bélgica” en *La Rioja*, N.544, 9-VIII-1906.

impedía<sup>2541</sup>. La venta de varias arquetas medievales por parte del Cabildo de la Catedral de Palencia volvería a despertar las reacciones contrarias tanto de la opinión pública como de las propias Reales Academias. En el Oficio de traslado de 24 de junio de 1893 firmado por el académico Fernando Mateo Collantes, en el que recordaba que la venta era nula, aludiendo la vigencia de la Real Orden de 10 de abril de 1866, *por la que se ordena que el clero no disponga de los objetos artísticos o arqueológicos que existan o sean descubiertos en las iglesias*, por lo que se defendía la tesis de que la Iglesia era depositario administrador de esos objetos, *por lo que al igual que el Estado no puede incautarse de ellos, tampoco el clero puede venderlo sin la autorización de la Santa Sede y sin la autorización del Estado, que tiene el alto patronato de inspección sobre los bienes eclesiásticos, pues para eso paga una asignación para el mantenimiento del culto y de sus ministros*. Se alentaba en el oficio a que se elaborara un inventario, *por diócesis, de todos los objetos artísticos y arqueológicos de verdadero valor que existen en los templos y se diese una ley prohibiendo la venta de esos objetos (...) y de ese modo se evitaría lo que acaba de suceder en esta Catedral*.

### **3.2.2. Una iniciativa tutelar de la Iglesia Católica a principios del siglo XX: La configuración de los Museos Episcopales.**

No siempre hubo desidia por parte de las autoridades eclesiásticas en torno a la tutela del Patrimonio Monumental, sino que en base a las nuevas propuestas que incluso desde los documentos pontificios se fue incentivando la fundación de museos episcopales, donde fueran depositados aquellos bienes que no podían ser conservado en parroquias, colegiatas o catedrales, con el fin de su exposición pública. Serían la iniciativa de los obispos catalanes los que van a llenar sus diócesis de museos episcopales, que serían objetos de elogios por parte de los sectores académicos y de las autoridades públicas. No cabe duda que sería el Museo Episcopal de Vich el más importante de todos ellos, que nacería a raíz de la celebración de la Exposición Universal barcelonesa de 1888, en la que la diócesis presentó la rica colección de obras de arte del arte medieval, por lo que gracias al éxito obtenido se fraguó la idea de crear una colección permanente, más aun bajo los auspicios de dos grandes personajes digno de destacar: los obispos Balmes y Verdaguer, verdaderos mecenas del arte catalán. Ramón Mélida en un artículo publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, se haría eco del papel trascendental que había representado la iniciativa del Museo Episcopal de Vich: *Hace poco tiempo lamentábamos la anunciada subasta de los tapices de la Seo de Zaragoza, y hoy viene muy al caso señalar y aplaudir el modo tan útil como patriótico que tienen los prelados de las diócesis catalanas de entender la conservación de las antigüedades pertenecientes a la misma. El pensamiento nació de la Exposición Universal celebrada en 1888. Hubo en ella una sección arqueológica, en la cual hizo lucido*

<sup>2541</sup> TORMO, Elías, Las tablas menlingianas de Nájera del Museo de Amberes. Su primitivo destino, fecha y autor en *Pintura, escultura y arquitectura en España*, Madrid, 1949, p.1-18.



*papel la diócesis de Vich con arcaicos retablos pintados, de los siglos XI al XIII, tejidos y bordados riquísimos (...) El pensamiento á que nos referimos fue el conservar reunidos esos objetos antiguos, que por serlo habían caído en desuso, de modo que en vez de devolverlos á los pueblos de la diócesis, formasen en Vich un Museo donde pudieran ser siempre estudiados y admirados. Este plan, sencillo, pero de muy difícil realización en otro caso, encontró amplios medios para ellos en la cultura, en la libertad y en el patriotismo del difunto señor obispo Morgades, bajo cuya iniciativa fue fundado en Vich el primer Museo Arqueológico Artístico-Episcopal, que una vez organizado, quedo abierto al público en 1902. Vengo de visitar este Museo y puedo asegurar que es uno de los más importantes de España y que no debe de dispensarse de visitarlo ningún arqueólogo, sobre todo los que se dediquen á estudiar las antigüedades de la Edad Media. El Museo, que cuenta hoy con 8.000 objetos, y la Biblioteca, rica en unos 20.000 volúmenes, forman una sola institución episcopal. Al frente de ella se halla un inteligente arqueólogo, que hizo sus estudios en Roma, el joven presbítero D. José Gudiol (...) En éstas y aquel se hallan ordenadas y expuestas convenientemente las antigüedades, habiéndolas de todas las edades y géneros, demostrando la amplitud del criterio que presidió á la formación del Museo (...) Todas estas riquezas, entre las que se cuentan muchas piezas capitales de la arqueología española, son productos de adquisiciones del Prelado ó de donativos. Un notable catálogo ilustrado, de venta en el mismo Museo, facilita á los visitantes los datos para apreciar el mérito de aquellas.*

Como apunta el propio Mélida, *el ejemplo del Obispo Morgades ha producido nobles y patrióticas imitaciones*, naciendo el Museo Episcopal de Lérida. Nacería bajo la iniciativa del obispo de la diócesis, José Mesaguer y Costa (1843-1920), que lo fundó en 1893, con una doble intencionalidad: recoger los objetos litúrgicos que se encontraban en desuso, procedentes de las distintas parroquias del obispado y utilizarlos para ilustrar la Cátedra de Arqueología Cristiana que se impartían para los futuros sacerdotes, al tiempo que preservaba el rico patrimonio de la diócesis de la fiebre del coleccionismo artístico entonces imperante<sup>2542</sup>. La iniciativa surgiría siguiendo las directrices del Papa León XIII que con la idea de fomentar los estudios arqueológicos, publicó la Circular sobre arqueología cristiana dirigida al Cardenal Oreglia el 4 de diciembre de 1894<sup>2543</sup>. A raíz de esta circular, Mesaguer publicó en 1895 una carta donde aparece intrínsecamente los objetivos que el obispo tendría en cuanto a la fundación del Museo, viniendo a ser una declaración de principios de la propia fundación, en sintonía con las directrices de Roma encarados al conocimiento y difusión de la arqueología sagrada: *El venerable clero del Obispado comprende la trascendencia de esta sapientísima carta, y no extrañará tomemos de ella pie para recomendarle eficazmente la arqueología sagrada. Ya ve el pequeño esfuerzo que hemos hecho para cooperar a los elevados fines de nuestro*

---

<sup>2542</sup> BERLABE, Carmen “La arqueología sagrada y el Museo Diocesano de Lleida”, *Los clasicismos en el Arte Español, Actas del IX Congreso del CEHA*, Madrid, 1994, pp.403-406.

<sup>2543</sup> BERLABE, Carmen “El Museo Diocesano de Lérida. Historia y vicisitudes”, *Artigrama*, Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, nº 20, 2005, pp.29-50.

*Santísimo Padre, fundando un modesto Museo en el Seminario Diocesano, y sobre este punto queremos hacer algunas reflexiones, para que no se desvíe nuestro pensamiento del camino en que lo hemos colocado. Primero diremos lo que no queremos que sea, y luego lo que Dios mediante ha de ser. No queremos que el humilde local destinado a museo se convierta en un panteón de restos más o menos carcomidos por la polilla, más o menos destrozados por la piqueta fiera o mansa, pero siempre criminal, no poco o mucho acribillados por instrumentos punzantes o cortantes, que blandió la ignorancia unas veces, la malicia otras o acaso ambos juntas. Tampoco pretendemos despojar a las iglesias de ningún objeto actualmente necesario para el culto divino, según hemos demostrado, devolviendo algunos ornamentos y alhajas que se nos trajeron sin pedirlos, para vender a beneficios de las mismas, como la preciosa Cruz de Torres de Segre, que mucho antes de pensar en museos hicimos restaurar devolviéndola al Párroco, un hermoso viril gótico de Os cuya venta prohibimos y otras cosas que saben los interesados de ellos y no hay para que publicar. Ni tan siquiera es nuestro ánimo privar a los pueblos de objetos que ya se han acostumbrado a ver toda la vida y de algún modo pueden ayudar a conservar la devoción o el atractivo a la Iglesia, pues comprendemos el apego que se tiene a ellos, aunque a veces sea completamente rutinario por no decir fanático como el de ciertas imágenes de que por respeto no queremos ocuparnos. Por más que conocemos nuestras atribuciones, siempre nos ha gustado usar algo menos autoridad de la que tenemos, y cargarnos de razón para hacer las cosas. Lo que queremos sea el museo, ya lo hemos dicho: un medio auxiliar para la cátedra de Arqueología Sagrada, a fin de que los alumnos del Seminario sepan conocer y distinguir los objetos de mérito de los que no lo tienen<sup>2544</sup>. El Museo Diocesano se fue ampliando progresivamente gracias a las compraventas y permutas que efectuó el obispo Meseguer y también a las donaciones que recibió. Se trataba de objetos de desuso, nunca preciosos, arrinconados en iglesias y rectorías. Estos objetos eran enviados espontáneamente por los párrocos, excepto casos puntuales de donación de particulares. Nuevamente Mérida se haría eco de la iniciativa del obispo de Lérida, y de otros prelados catalanes sobre la conservación de los bienes de interés histórico y artístico pertenecientes a las diócesis, subrayándose el estímulo que suponía para las localidades donde se instalaban, evitándose la venta fraudulenta de los mismos: *El ejemplo de los prelados catalanes bien merecen ser imitados para evitar de este modo esas ventas de objetos pertenecientes a los tesoros eclesiásticos, y que de mano de los comerciantes de antigüedades pasan a las vitrinas de los museos del extranjero (...) Estos Museos no solamente responden á un fin patriótico que conviene estimular y que es justo enaltecer; son además, fuentes de riquezas para las ciudades que lo poseen, pues todos los viajeros extranjeros y no poco nacionales, lo que van á visitar en las poblaciones para ellos nuevas son los monumentos y los Museos, es decir, el Arte, cuya lengua universal habla al espíritu de todo el mundo*<sup>2545</sup>.*

<sup>2544</sup> La carta está publicada en *Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Lérida*, 26 de agosto de 1895, núm. 17, pp.313-315.

<sup>2545</sup> MELIDA, J.R. "Museos episcopales en Cataluña" *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año VII, Octubre de 1903, Núm. 10, pp.306-308.

La iniciativa de las diócesis catalanas se extenderían por otros puntos de la geografía peninsular, prolongándose en las etapas posteriores, aunque en muchos casos quedó como un proyecto frustrado como ocurrió en la creación de museo de Arqueología cristiana en Sevilla en 1904, que aparece recogido en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, del que extraemos estos fragmentos: *Entre las obras con que esta capital solemnizará el año jubilar de la Inmaculada Concepción, hay una que merece el aplauso de los amantes del arte: la creación de un Museo de Arqueología Cristiana. El Museo se instalará en el suntuoso y bellissimo palacio de San Telmo, propiedad que fue de los Duques de Montpensier y hoy Seminario general y pontificio. Forman la Junta encargada de realizar el proyecto, el Sr. Marqués de Torre Nueva, como presidente, siéndolo asimismo de la Academia de Bellas Artes, D. Manuel de Torres, arcediano de la santa iglesia Catedral; D. Cayetano Sánchez Pineda y D. Virgilio Mattoni, como Vocales; y finalmente, D. Federico Roldán, catedrático del Seminario, como secretario. Los párrocos y rectores de las iglesias del arzobispado, correspondiendo á la indicación que se les ha hecho la Junta en nombre del Prelado, y espontáneamente, van depositando en manos de este insigne varón objetos que, por su deterioro ó antigüedad, no tenían aplicación para el culto, y sin embargo, ocupan su lugar correspondiente en el Museo. No pocas personas particulares secundan la iniciativa del Prelado hispalense, y muchos miembros del episcopado quieren contribuir con su óbolo á la creación de dicho Museo Arqueológico*<sup>2546</sup>. Cabe mencionar que estos museos diocesanos carecerían de un régimen legal, a lo que se unía en muchas ocasiones la falta de ayuda pública para su mantenimiento, que no se intentaría resolver hasta la promulgación de la Real orden de 9 de enero de 1923.

### **3.2.3. La restauración de bienes inmuebles religiosos de interés histórico y artístico.**

La restauración de los bienes inmuebles religiosos de interés histórico y artístico se prolongaría durante el régimen de María Cristina, especialmente en el capítulo de las asignaciones presupuestarias que estaban destinadas al culto y a la reparación de templos y edificios religiosos, lo que provocaría un verdadero problema de selección de inmuebles a reparar al carecer de sumas suficientes para poder atender las múltiples demandas del momento. Ante estas circunstancias sería promulgada la **Real orden de 4 de noviembre de 1897** por la que se establecía limitaciones a la aprobación y ejecución de proyectos de obras de reparación de templos y edificios religiosos, con objeto de que no se contrayeran en cada año económico obligaciones superiores al crédito fijado en presupuesto para esta atención, como así quedaba insertado en la Exposición de Motivos: *La aprobación de proyectos de reparación de templos y edificios religiosos, cuyo importe total excede del crédito consignado en cada presupuesto para esta obligación concordada, produce en la práctica dificultades, y no se armoniza con la ley de Contabilidad, que podía dejar en evidencia la tutela pública de restauración promovida por el Estado: Semejante proceder, siquiera reconozca por*

---

<sup>2546</sup> Variedades en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año VIII, Octubre de 1904, Núm. 10, p.465.

*causa el laudable deseo de llevar a cabo el mayor número de reparaciones posibles, ampliando al efecto el plazo para ejecutarlas, a fin de que se abonen con cargo a dos o más presupuestos, no debe continuar. A ello se opone lo que aconseja la prudencia, contraria disposiciones legales, y hasta puede perjudicar a obras que tienen que sufrir soluciones de continuidad en el desarrollo y conservación, que en muchas ocasiones eran medidas contradictorias, ya que al pesar de que se dispone de créditos con que no se cuenta de una manera positiva, y que, aun siendo probable, pueden, por circunstancias económicas, en algún caso no alcanzar la cifra calculada y comprometida, y hasta dejar abandonadas apremiantes atenciones de momento por haber adjudicado sumas importantes a otras menos urgentes. De esta manera quedaba en suspenso hasta nueva resolución las subastas de obras de reparación de templos y edificios religiosos, anunciadas para el primer semestre de 1898 (art.1), siendo los meses de marzo y abril de cada año cuando se harían la designación de los proyectos que debían de llevarse a cabo en el económico siguiente, tomando como base para ella, no solo la mayor urgencia de las obras, sino el crédito probable con que crea contarse para su pago (art.2), no ampliándose el plazo señalado en cada proyecto para la ejecución de las obras, al solo efecto de que se abonen en dos o más años económicos (art.3). Serían excluidos aquellos proyectos cuyo plazo indispensable para la ejecución de las obras exceda de un año económico ni los que por su importancia se dividieran en secciones para subastarlas separadamente, aunque en este caso no se podría aprobar sin previo acuerdo del Consejo de Ministros (art.4).*

#### **3.2.4. Un conflicto tutelar entre el Estado y la Iglesia: La tutela de la sinagoga de Córdoba.**

En el año 1876 se redescubre la sinagoga de Córdoba, por lo que el secretario de la comisión local del monumentos, Rafael Romero Barros, emitió un informe a fin de recaudar fondos para proceder a las obras de restauración. En el año 1884 se encontraría la inscripción fundacional, por lo que se inició la solicitud de declaración del inmueble como Monumento Nacional. Con la ayuda de las instancias de la Real Academia de la Historia, la sinagoga sería declarada por Real Orden de 24 de enero de 1884, monumento nacional. Sin embargo, la declaración del Monumento supondría un conflicto con la Iglesia, ya que el Estado exigiría al titular del edificio el traspaso de dominio. En el Informe de la Real Academia de la Historia del 12 de octubre de 1901 sobre el estado legal del bien inmueble redactado por Fidel Fita, académico de la Historia, se precisaba cuales debían de ser las atribuciones de que la Comisión de Monumentos de Córdoba tenía sobre la propia sinagoga, ala que correspondía la inspección del inmueble, conllevando la custodia del mismo que en suponía en si misma una traslación de dominio al Estado, fundamentando a su vez en que la sinagoga había sido declarada Monumento Nacional: *La Real orden declarando monumento nacional la sinagoga de Córdoba, dispuso que esta fuera puesta bajo la inspección de la Comisión de Monumentos de dicha provincia, se consideró obligada dicha Comisión de intervenir en todas las obras de restauración, y a restituir su verdadero carácter al templo hebreo (...).*

*Como la facultad de inspeccionar supone necesariamente el cargo y cuidado de velar sobre ésta, la Comisión de Monumentos de Córdoba, muy celosa en el cumplimiento de los deberes que le están encomendados, comenzó ocupando dos habitaciones que forman parte integrante de la sinagoga (...) En esta posición, autorizada por la Real Orden de 24 de enero de 1885, ha continuado la Comisión de Monumentos de Córdoba (...) sin la menor reclamación por parte de la autoridad eclesiástica. Aludió la actitud del Obispo de Córdoba, que se opondría a que el inmueble quedara bajo la jurisdicción del Estado, por lo que el académico de la Historia defendería que la sinagoga debía quedar en el estado legal al dictarse la declaración de Monumento Nacional: Pero ahora ocurre que el actual Obispo de Córdoba, desentendiendo de la Real Orden que declaró Monumento Nacional la sinagoga de dicha ciudad; del hecho de haber costeadado el Estado las obras de restauración y no respetar una posesión legal de quince años, ha arrendado las habitaciones contigua al templo, por una cantidad insignificante (...) disponiendo para su uso particular del vestíbulo y tribuna de la sinagoga, negando a vecinos y extranjeros, y aún a los individuos de esa Real Academia el poder visitar, estudiar y admirar el Monumento Nacional declarado. La autoridad superior en el orden eclesiástico de la Provincia de Córdoba no podrá demostrar documento alguno que es propiedad de la Iglesia la sinagoga de que se trata, y si pudiera probarlo, resultaría el edificio y sus anexos, comprendidos con las leyes desamortizadoras. Estima pues la Real Academia de la Historia, que es necesario y urgentísimo restituir las cosas al estado que tenían al dictarse la Real orden de 24 de enero de 1885, en representación del Estado (...) Y para conseguirlo, bastará una sencilla aclaración a la mencionada Real disposición. Cuando esta Corporación pidió que la Sinagoga de Córdoba se declarase monumento nacional, procedió que fuera puesto bajo la inspección y custodia de la Comisión de Monumentos de la provincia.*

Finalmente, sería promulgado la **Real Orden de 14 de octubre de 1901**, por el que se dispondría que a la Comunidad de Monumentos de Córdoba corresponde no sólo la inspección sino también la custodia de la sinagoga de dicha ciudad y todos sus anexos, trasladando esta disposición al Gobernador Civil de la provincia, por lo que al declarar la custodia del monumento se estaba enunciando una traslación de dominio. El Obispo de Córdoba mediante un oficio de 7 de diciembre de 1901 se opondría a la entrega de la sinagoga a la Comisión de Monumentos de Córdoba, fundamentada en la tesis de que a pesar de que el inmueble hubiera declarado Monumento Nacional no por ello perdía su estado de dominio, ni su funcionalidad como templo: *Tratándose de desposeer a la Diócesis de una de sus iglesias parecía natural que hubiera precedido el oír al Prelado de la misma, tanto más cuanto que yo me entendido con la Dirección General de Instrucción Pública sobre este mismo asunto en concepto de Obispo, y como a tal se le ha reconocido la Dirección (...) Poco importa que fuera sinagoga hace siglos. En la actualidad es una iglesia católica, aunque en ella haya bastante tiempo que no se ha dado culto. Hay muchas iglesias en la Diócesis que se encuentran en el mismo caso, y sin embargo no han perdido su carácter religioso y eclesiástico, ni la iglesia ha perdido sobre ellas su dominio, como no lo ha perdido en la Santa Iglesia Catedral a pesar de estar declarada Monumento*



*Nacional y a pesar de costearse su conservación y reparaciones con fondos del Estado, como sucede en todas las iglesias de España después de haberse apoderado el Estado de todos los bienes de la misma.*

*(...) La inspección, vigilancia y custodia, confiadas a la Comisión Provincial de Monumentos, no es incompatible con el carácter católico de la ermita, ni con el dominio que la Iglesia ejerce sobre ella; y lo prueba el hecho de que se ha puesto ningún obstáculo en ningún tiempo para que la Comisión ejerza sus funciones de inspección y vigilancia. (...) El sentido general que domina en la Real Orden es el de excluir absolutamente a la Iglesia de los derechos de dominio que les corresponden, según las leyes vigentes sobre la Ermita de San Crispín y San Cipriano. Esta exclusión es imposible sin violar el artículo 1º de la ley 4 de abril de 1860 (...).*

### **3.3. Una aproximación del significado jurídico de la declaración del Monumento Histórico y Artístico en la etapa de la Regencia.**

Durante la etapa de la Regencia se va a seguir articulando un régimen específico de protección y tutela de una serie de bienes inmuebles, bajo la denominación de declaración de Monumento Nacional histórico y artístico. La configuración jurídica de aquellos bienes pertenecientes al Patrimonio Monumental como Monumento Nacional de interés histórico-artístico iniciado en las etapas anteriores se intensifica durante la etapa de la Restauración. Desde 1886 hasta 1904 fueron declarados como Monumento Nacional los siguientes bienes inmuebles:

- Real Orden 4 de enero de 1886, Monumento Nacional, la iglesia convento de Santa Teresa, en Avila.
- Real Orden de 28 de febrero de 1886, Monumento Nacional, la iglesia de San Miguel de Escalada, Gradedes, en la provincia de León.
- Real Orden de 17 de junio de 1887, Monumentos históricos-artísticos nacionales, las iglesias catedrales viejas de Santa María y nueva, de la Asunción de la Virgen, de la ciudad de Salamanca.
- Real Orden de 10 de julio de 1888, Monumento Nacional, la iglesia de Sancti Spiritus de Salamanca.
- Real Orden de 14 de febrero de 1889, Monumento Nacional, la iglesia de Santa María la Real, de Sangüenza, en la provincia de Navarra.
- Real Orden de 12 de marzo de 1889, Monumento Nacional, la iglesia colegiata y claustro de Santa Juliana, de Santillana del Mar, en la provincia de Santander.
- Real Orden de 13 de junio de 1889, Monumento Nacional, el Real Monasterio de San Juan de la Peña, Botaya, cerca de Jaca, en la provincia de Huesca.
- Real Orden de 5 de septiembre de 1889, Monumento Nacional, la iglesia catedral de Santa María, de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca.

- Real Orden de 5 de septiembre de 1889, Monumento Nacional, la iglesia Catedral de la Transfiguración, de Zamora.
- Real Orden de 17 de octubre de 1889, Monumento Nacional, el ex monasterio de Santa María, la Real en la ciudad de Nájera, en la provincia de Logroño.
- Real Orden de 3 de julio de 1890, Monumento Nacional, la iglesia y Convento de San Esteban, de Salamanca.
- Real Orden 4 de abril de 1892, Monumento Nacional, la iglesia colegial de Santa María la Mayor, de Toro, en la provincia de Zamora.
- Real Orden de 27 de mayo de 1893, Monumento Nacional, la iglesia colegial de Santa María de Lebeña, Cillorigo, en la provincia de Santander.
- Real Orden del 10 de agosto de 1893, Monumento Nacional, el Real Monasterio de Comendadoras Canonesas de la Orden Militar y Pontificia del Santo Sepulcro, de Zaragoza.
- Real Orden de 13 de noviembre de 1894, Monumento Nacional, la iglesia parroquial de San Martín de Frómista, en la provincia de Palencia.
- Real Orden de 1 de junio de 1895, Monumento Nacional, la iglesia parroquial de San Salvador de Guetaria, en la provincia de Guipúzcoa.
- Ley de 2 de agosto de 1895, Monumento Nacional, Colegiata de San Pedro de Cervatos, provincia de Santander.
- Ley de 2 de agosto de 1895, Monumento Nacional, Castillo de Cumbres Mayores, Huelva.
- Ley de 14 de agosto de 1895, Monumento Nacional, las ruinas del convento de Santo Domingo, de la ciudad de Pontevedra.
- Ley de 14 de agosto de 1895, Monumento Nacional, el templo de Santa María la Real de Sar, Santiago de Compostela, La Coruña.
- Ley 22 de agosto de 1896, Monumento Nacional, la iglesia catedral metropolitana de Santiago de Compostela, La Coruña.
- Ley 26 de agosto de 1896, Monumento Nacional, el teatro romano de Sagunto, Valencia.
- Ley 26 de agosto de 1896, Monumento Nacional, el convento-iglesia de San Francisco de Pontevedra.
- Real Orden de 12 de diciembre de 1896, Monumento Nacional, la torre de la iglesia de San Esteban de Segovia.
- Real Orden de 26 de febrero de 1897, Monumento Nacional, la iglesia basílica de San Juan Bautista, en Baños de Cerrato, en la provincia de Palencia.
- Real Orden de 11 de mayo de 1897, Monumento Nacional, el templo de Nuestra Señora de la Antigua, de Valladolid.

- Real Orden de 26 de marzo de 1900, Monumento Nacional, la ermita del Santo Cristo de la Cruz y Nuestra Señora de la Luz, de Toledo.
- Real Orden de 8 de mayo de 1901, Monumento Nacional Histórico Artístico, la capilla de Santa María de Jesús del Antiguo Seminario Conciliar de Sevilla.
- Ley 23 de mayo de 1902, Monumento Nacional, la iglesia catedral de Nuestra Señora de los Remedios, de Mondoñedo, Lugo.
- Real Orden de 23 de agosto de 1902, Monumento Nacional, la iglesia catedral basílica de Santa María de Gracia y San Julián Conquense, de Cuenca.
- Real Orden de 10 de noviembre de 1902, Monumento Nacional, el edificio de Santa Cruz de Mendoza, Toledo, comprendiendo solamente la fachada principal con el solar a su frente que le sea propio, el vestíbulo, iglesia, patio y escalera principal, con sus cimientos, muros y cubiertas, a cuyo efecto se practicará el deslinde conveniente para que la parte monumental del edificio quede separada del resto del mismo.
- Real Orden del 22 de junio de 1904, Monumento Nacional, el templo metropolitano del Pilar, en Zaragoza.
- Real Orden de 8 de noviembre de 1904, Monumento Nacional, el castillo de la Mota, de Medina del Campo, Valladolid.
- Real Orden de 22 de diciembre de 1904, Monumento Nacional, la iglesia magistral de los Santos Justos y Pastor, de Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid<sup>2547</sup>.

### **3.3.1. Una discutida selección de bienes: las críticas de Rodrigo Amador de los Ríos al sistema administrativo de declaración de Monumentos Nacionales.**

Una de los problemas que va a generar la tutela específica de la declaración de Monumento Nacional será la propia selección de bienes elegidos, al quedar en la mayoría de los casos fuera de la lista un gran número de inmuebles que hubieran tenido que ser escogidos. En 1903 Rodrigo Amador de los Ríos en la revista *La España Moderna* con el título los intereses creados señalaba como el propio procedimiento estaba viciado por parte de las propias instituciones administrativas, al elaborarse una selección más por interés político que puramente artístico o histórico. Como contrapunto elaboraría un listado de bienes que según el erudito sevillano debían ser declarados como tales, especialmente por las lagunas que existían de algunos periodos histórico-artísticos, especialmente los correspondientes al herreriano y barroco.: *Ninguno de estos monumentos, cualquiera que haya sido su categoría, ha logrado salvar el lapso de tiempo que desde su fundación hasta los días actuales media, sin que en su*

<sup>2547</sup> La lista aparece publicada en *Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España*, Madrid, 1973, pp.29-36.

*integridad y en su forma originaria haya dejado de experimentar reparos reformas, restauraciones y reconstrucciones por causa de las cuales aparecen los estilos y gustos posteriores desfigurándolos y adulterándolos con frecuencia, hasta el punto de que, a veces, se confunden las huellas primitivas con las agregaciones posteriores, circunstancia que dificulta sobre modo la clasificación artística; pero de la precedente lista se obtiene la conclusión de que han sido declarados nacionales setenta y cuatro monumentos religiosos de todos estilos, épocas y categorías, ocho militares y seis civiles, y de ellos, dos, bien que no por completo, corresponden a época anterior a la dominación romana; otros dos a este periodo; una al de la Monarquía visigoda, más de sesenta al de la Reconquista; nueve ya a la Edad Moderna, y cinco al arte mahometano. Adviértese pues, desde luego, que aún supuesta la importancia de todos y cada uno de estos monumentos para la historia y para el arte españoles, ni están en la relación incluidos cuantos debían figurar en ella por uno u otro concepto, ni hay presupuesto posible para atender debidamente, no ya a la restauración, sino a la mera conservación de ellos. Por esta razón, ha venido a ser la declaración oficial equivalente de cédula de destrucción, pues en no pocos casos, designado el arquitecto, reconocido el monumento, formulado el proyecto de restauración, aprobado convenientemente con el presupuesto oportuno, y comenzadas las obras, éstas se han paralizado forzosamente, con grave daño del monumento y escándalo e indignación de los amantes de nuestras glorias artísticas; y cuando no, ocurre, a las veces, que terminada felizmente la obra, es entregado el edificio en que se ha ejecutado, ya al ramo de Hacienda, según con San Gregorio de Valladolid acontece, o al de Guerra, como se ha hecho con San Marcos en la ciudad legionense.*

Uno de los problemas que generaba la conservación de estos monumentos era primordialmente la designación presupuestaria que tenía que establecer periódicamente el Gobierno, y que debido al amplio número de edificios que iban siendo declarados como Monumento Nacional podían: *Preciso es, por tanto, labrar la persuasión en el ánimo de las gentes, a fin de que se convenzan de la imposibilidad material en que el Estado se halla para atender debidamente a estas obligaciones que ha echado sin premeditación sobre sus hombros, movido por el noble deseo de evitar que aquellas glorias artísticas e históricas desaparezcan. Catedrales, Colegiatas, Iglesias, Ermitas, Monasterios, multitud incontable de edificios religiosos que deben depender y depender de otros centros que el Ministerio actual de Instrucción Pública y Bellas Artes, figuran en el catálogo reproducido. Por lo que hace a las primeras, no siendo la construcción propiedad del Estado, no debe éste ser tampoco racionalmente quien dedique a su conservación las partidas consignadas en el presupuesto, por más que en virtud de la ley desamortizadora el Estado haya venido por subrogación a reemplazar a aquellos prelados poderosos que empleaban en ocasiones parte de sus rentas en trastornar, con buenos propósitos los unos, llenos de vanidad, los otros, los edificios catedrales principalmente. Al mismo tiempo avisaría que de no cambiar el procedimiento administrativo de declaración podría quedar obsoleta, al quedar fundamentada más en intereses político particulares que los puramente estéticos: Basta hoy para obtener la declaración de monumento nacional que el prelado de una diócesis goce de gran predicamento y quiera que en su iglesia sean ejecutadas ciertas obras; que el diputado o senador del distrito tengan interés por lisonjear a sus electores en*

*que tal o cual fábrica se restaure; que el cacique de la localidad lo exija, o que el ministro lo desee, para que desde luego se forme el oportuno expediente; se influya sobre la Academia que ha de determinar, y se expida la Real Orden declarativa, aumentando la relación de los monumentos y las cargas del Estado en ocasiones*<sup>2548</sup>.

De esta manera Rodrigo Amador de los Ríos defendería una manera de realizar una clasificación administrativa de los bienes a conservar, entre aquellos que en cierta medida pudieran tener un interés claramente nacional, de aquellos que solamente lo tuvieran de carácter regional o provincial, que en cierta manera se estaba anticipando a la idea de una des administrativa: *Impónese por tanto, a los Ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes, la necesidad de una verdadera selección, y sobre todo, la de una clasificación administrativa que, en ley de equidad, sobre producir el beneficio, produzcan desahogo al Estado y no contribuya a la destrucción de los monumentos; pues „si resulta loable la indicada relación, a la verdad que es por extremo triste el estado en que todos los monumentos nacionales se hallan, por no ser cumplidero atender ni a su restauración ni a su entretenimiento. Sentado el principio de que deben ser reparadas y conservadas las creaciones artísticas de las pasadas edades, para ejemplo de la presente y gloria de la Nación, parece natural que se procure escoger entre aquellas las que son verdaderamente típicas y características en cada arte, época y estilo; y por tanto, que si existen, se guarden los monumentos de los tiempos que preceden a las épocas históricas, y los que en éstas representan la cultura general del país o conmemoran hechos de importancia capital para el mismo en su totalidad política, o son ya los únicos que subsisten, dando, en consecuencia, el carácter de nacionales exclusivamente a los referidos monumentos, de cuya conservación debe sin disputa alguna el Estado. Otros pueden existir todavía que revelen y conmemoren la vida de cada una de las regiones o comarcas en el tiempo, y cuyo interés, sin el concepto más universal trasciende a la nación entera por sus derivaciones y consecuencias, en el más restringido y propio sea privativo de las regiones o comarcas memoradas; y claro es que no ha de imponerse en rigor la obligación de conservarlos al conjunto nacional, sino que debe ser función propia de la región o la comarca. De igual suerte acontece con respecto a aquellos otros monumentos que son representación genuina de la vida, en cada provincia o departamento de los que la región integran, y que por tanto, deben de estar a cargo del presupuesto provincial, como ocurre en relación a los que solo a la localidad afectan en el doble sentido histórico y artístico, siendo el Municipio quien tiene la obligación inexcusable de perpetuarlos para los fines superiores de la general cultura. Así, pues, y prescindiendo de otros secundarios intereses del momento, los monumentos de la nación han de ser clasificados, para que sea eficaz en todos conceptos el noble anhelo de conservación, y no se dé el triste espectáculo de que se destruyan y desaparezcan por el abandono que impone la carencia de medios y recursos en el Estado, en Monumentos Nacionales los unos, Monumentos Regionales los otros, y Monumentos Provinciales y Monumentos Municipales los que tal condición ofrecen, de acuerdo en tal clasificación (...).*

<sup>2548</sup> AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo “Los Monumentos Nacionales”, *La España Moderna*, 1903, abril, pp.30-64.



El erudito sevillano criticaría asimismo los criterios utilizados a la hora de seleccionar los bienes que tenían que ser declarados Monumento Nacional: (...) *a nuestro juicio, no sólo no carece de interés, sino que, desahogando el presupuesto del Estado, permitiría atender con mayor solicitud a los monumentos de verdadero carácter nacional, parece indispensable llamar la atención del Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en primer lugar, y después la de las Reales Academias que, más o menos directamente, han intervenido en las declaraciones consignadas y reconocidas hoy, a fin de que, designada una ponencia de personas especialmente entendida en la historia del Arte y la Arqueología, proponga el número de los monumentos cuya reparación y conservación incumbe como obligación sagrada al Estado, por ser efectivamente nacionales, y señale a las Corporaciones Provinciales y Municipales los suyos propios, a fin de que los Gobiernos obliguen forzosamente, por su parte, a aquellos a consignar en sus respectivos presupuestos las cantidades necesarias para atender a los monumentos que afectan a la región, a la provincia o al municipio, conforme dejamos arriba indicado. No se nos oculta que en la nómina oficial ni están, cual hemos demostrado, todos los monumentos que merecen ser señalados cual nacionales, ni lo son tampoco los que allí se consignan, siendo de extrañar que si hay Catedrales como las de León, Burgos, Salamanca, Santiago, Mondoñedo, Cuenca y otras, cuya conservación se halla por esta causa a cargo del Estado, no se haga mención de la de Toledo, a la cual no faltan títulos para ser colocadas en lugar preeminente, con tanto mayor causa cuanto, que por desventura, es de las más necesitadas en orden a las obras de su exterior, híbrido, desabrido, descompuesto y en desacuerdo con la suntuosidad que en su interior respira, no comprendiendo, con verdad, qué razones hayan podido existir para excluir de la lista a que nos venimos refiriendo, no solo las creaciones herrenianas, como la Basílica de San Lorenzo, de El Escorial, sino las borrominescas, las churriguerescas y las pseudos clásicas, las cuales son páginas elocuentes del desenvolvimiento del Arte en nuestra Patria.*

### **3.3.2. El interés histórico y artístico como fundamento jurídico tutelar del Patrimonio Monumental: Una relectura del nacionalismo español en la etapa de la Regencia.**

En el Informe de la Real Academia de la Historia sobre la idoneidad de ser declarado como Monumento Nacional la iglesia de Santa María, la Real de Sangüenza, en la provincia de Navarra, se encierra una verdadera definición del valor artístico del monumento: *si damos valor histórico a los antiguos monumentos, no por lo que son en su materia y forma, sino por los hombres que con ellos convinieron, y por los hechos memorables a que sirvieron de teatro, o de que fueron mudos testigos (...) El interés que produce toda obra humana de remota fecha, se gradúa bajo tres aspectos: hay monumentos informes de las pasadas edades que permanecen en pie a pesar de la acción incesante del hombre que trastorna la superficie de la tierra, y esos nos interesan solo por ser antiguos; hay otros que a su dicturnidad reúnen, ora la bella forma, ora una extrañeza que incita al estudio, y en estos el interés toma carácter artístico; otros, por fin, a su antigüedad y condiciones estéticas más o menos comprensibles, juntan la importancia que dan siempre a las grandes moles inertes de llevar adheridos recuerdos de hechos señalados o de preclaros varones que son, merced a la virtud aumentativa del tiempo y de la*

*tradición, colosales figuras de númenes protectores de que la humanidad se enorgullece, y estos revisten el prestigio venerando que llevan en si todas las cosas dignas de la admiración y culto de los pueblos civilizados. A esta última categoría pertenece el antiguo templo objeto de este informe, y desde este punto de vista es indudable que la iglesia de Santa María Real de Sangüesa ha de aparecer bajo todos conceptos digna de que sea declarada oficialmente lo que ya de por sí es, a saber: un insigne monumento histórico y artístico a la par.* La valoración del arte medieval identificado con los valores nacionalistas de exaltación de la identidad de España va a dar como resultado que un gran número de bienes inmuebles declarados como Monumento Nacional sean edificios de estilo gótico y románico, obviando otros edificios de clara valía. Una amplia polémica en el propio seno de la Real Academia de San Fernando suscitada por la declaración de Monumento Nacional de la Basílica del Pilar de Zaragoza, al considerar por algunos y académicos que anteriormente tenían que haber sido declarada la propia Seo es un claro ejemplo de cómo no existió un claro criterio a la hora de designar un bien como Monumento Nacional. En el amplio debate que se produce entre los años 1903 y 1906 y recogidas en las propias actas de la Real Academia de San Fernando se refleja las diversas posturas que habían ido cuajando a la hora de seleccionar un monumento. Al final la votación arrojaría a favor a la declaración de la Basílica del Pilar, gracias a los votos de personalidades como García Alix, Altavilla, Velázquez o Repulles, emitiendo por el contrario un voto negativo Arturo Mélida, Rodrigo Amador de los Ríos o el arquitecto Fernández Casanova.

Todavía en 1904 en un debate parlamentario de Cortes con motivo de construir la Casa de Correos en el Parque del Retiro de Madrid, el diputado Constantino Rodríguez echaría en cara el papel de la Real Academia de San Fernando había tenido para que la basílica del Pilar de Zaragoza fuera declarada Monumento Nacional, obviando otros edificios como la Seo, por lo que cree que existe más bien unos criterios políticos que puramente estéticos: (...) *reconocerá el Gobierno, que si como edificio y como monumento arquitectónico el del Pilar de Zaragoza merece los honores de ser declarado monumento nacional, antes de que esa declaración se hiciera debían haberse declarado monumentos nacionales la Catedral de Toledo, la de Burgos, la de León, la Mezquita de Córdoba, las Catedral de Cuenca y otras muchísimas de España, aunque esto tiene una explicación que a mí se me ha ocurrido desde luego, y es que había un gran interés en declarar monumento nacional el templo del Pilar de Zaragoza, porque desde que esa declaración se haga por parte del Gobierno, los gastos de conservación serán de cuenta del Gobierno; pero si en eso hubiera de seguirse un criterio de justicia absoluta, no negando yo condiciones arquitectónicas al templo del Pilar de Zaragoza, por encima de él, además de lo que he citado, hay otra en la misma ciudad que todavía no ha obtenido semejante declaración y es la Colegiata de la Seo*<sup>2549</sup>. La respuesta de García Alix nos sugiere cual era la verdadera obligación que el Estado adquiriría a la hora de declarar un inmueble como Monumento Nacional

<sup>2549</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, 18 de junio de 1904, Núm. 175, p.5232.

de interés histórico y artístico: *Su Señoría ha dicho que al declararle monumento nacional se atenderá a su conservación con recursos del Tesoro, y yo tengo que manifestar a S.S. que la declaración de monumento nacional no lleva consigo esa obligación: lo que lleva consigo es la intervención del Estado por medio de personas competentes, como son los que forman parte de la Academia, para que no entre cualquiera a proyectar y a hacer modificaciones en el edificio. Son dos cosas distintas, y en la cuestión de votar recursos por el Estado, ya ha visto el Sr. Rodríguez que sin estar declarado monumento nacional la Catedral de Sevilla, se votaron cantidades considerables, para que no viniese a tierra tan hermoso templo*<sup>2550</sup>.

### **3.3.3. El régimen jurídico en el ámbito de los derechos patrimoniales. Los monumentos nacionales como bienes públicos.**

En el Informe de la Real Academia de la Historia de 23 de abril de 1889 para que fuera declarado Monumento Nacional el Real Monasterio de San Juan de la Peña, se delimita nuevamente el carácter público del bien inmueble incluido en este régimen específico: *Pero si la declaración de monumento es obvia, y no como quiera, sino como de uno de los primeros de nuestra patria, el de nacional lo tiene también de hecho, pues lo posee el Estado (...). El Estado lo cedió a la Diputación provincial de Huesca, la cual, con los sentimientos poco cuantiosos de los montes inmediatos, ha atendido a la conservación del monumento y manutención de guardas*

#### **- La cesión de inmuebles en usufructos a las comunidades religiosas.**

Sin embargo, para poder solventar la fase de presupuestos por parte del Estado, va a ser cedido a algunas comunidades religiosas, en calidad de usufructuario, como podemos observar en el informe anteriormente citado de la Real Academia de la Historia: *pero al presente por razones de economía cree de absoluta urgencia la calificación de Monumento Nacional. Conviene en lo mismo los Ilmos. Sres. Obispo de Huesca y Jaén, y la Comisión provincial de Monumentos, que contestando con fecha de 20 de marzo a un oficio que la Academia le dirigió en 22 de diciembre último sobre este asunto, manifiesta que a los motivos ordinarios que siempre han existido para no abandonar aquel ex monasterio a las injurias del tiempo, se añaden ahora otros provenientes de la nueva situación de las cosas, pues la nueva construcción del ferrocarril hará sumamente fácil y cómoda la hoy muy difícil y molesta visita a dicho Monasterio, y por lo tanto, el triste espectáculo que ofrece dará más que nunca en rostro a nuestra cultura nacional; mientras que, por otra parte, nos amenazará el peligro de que la ciega y bárbara codicia encuentre allí materiales de construcción, de extracción poco costosa. Más, en cambio de estos riesgos, hay también una esperanza que estimula a la Comisión de Monumentos de Huesca a recomendar este asunto, y es la de que le consta que restaurado el Monasterio, los celosos Prelados antes citados lo utilizarían para un servicio eclesiástico y religioso, que sería sin duda alguna el medio más seguro, adecuado y duradero para su digna y decorosa conservación.*

---

<sup>2550</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, 18 de junio de 1904, Núm.175, p.5235.

**- *El cambio de uso público de un bien inmueble declarado Monumento Nacional.***

La declaración de Monumento Nacional podía conllevar un cambio de uso público, como fue el caso de la supresión del Establecimiento Penal de Palma de Mallorca, que estaba ubicado en el antiguo convento de San Francisco. En virtud del Real decreto de 19 de enero de 1893 sería suprimido dicho establecimiento penal, y restituyendo *tan inestimable monumento arquitectónico del siglo XIII, al Ministerio de Fomento, para su conservación y custodia, sustituyéndole así de los ultrajes a que forzosamente habría de estar sometido, de continuar en el servicio a que últimamente ha sido destinado, más implacables todavía que los de la acción incesante del tiempo.*

**- *Los límites de la cesión de inmuebles propiedad del Estado para uso público y su proyección en los bienes de interés histórico y artístico: El Real decreto de 9 de abril de 1896.***

Un hecho significativo en el orden del uso público a los que fueron destinado algunos bienes inmuebles estaría en la promulgación del **Real decreto de 9 de Abril de 1896** determinando las disposiciones vigentes para la ocupación y destino de las propiedades del Estado y para la cesión de edificios para los servicios en los diversos Ministerios, declarándose al efecto caducadas todas las cesiones de edificios o terrenos no destinados al objeto para que fueron concedidas. En la Exposición de Motivos se designaba todavía como parte integrante y valiosa del patrimonio nacional *las fincas urbanas, rústicas y forestales, así como la venta de las declaradas desamortizables, encargaron las leyes de 1º de mayo de 1855, 11 de julio de 1856, 1º de junio de 1869 y 21 de diciembre de 1875 al Ministerio de Hacienda*, precisando que exclusivamente a través de un dictamen razonado, y en su caso, previo el de la Junta de edificios públicos, podían tomarse acuerdos en relación a la ocupación y destino de las propiedades del Estado, y a la cesión para determinados servicios en los diversos Ministerios, aunque subrayando que solamente se podría hacer con *el carácter de mero usufructo, ya que otra forma más definitiva únicamente el Poder legislativo puede otorgarla*. De esta manera se declararían caducadas las cesiones de edificios y terrenos de propiedad del Estado hechas con arreglo a la ley de 1º de junio de 1869 a Corporaciones civiles y personas o empresas particulares, si los edificios y terrenos de que se trata no se hubieren destinados a los objetos que fueron concedidos (art.1º). Al mismo tiempo serían revisadas las cesiones de edificios y terrenos de propiedad del Estado para servicios públicos, que no se hubieran otorgados en virtud de una ley especial, bien por acuerdo del Consejo de Ministros, bien por Real orden emanada del Ministerio de Hacienda, con arreglo a lo dispuesto en la citada ley 1º de junio de 1869 e Instrucción de 11 de enero de 1870, con el objetivo primordial de que previo acuerdo de la Junta creada por la Ley de 21 de diciembre de 1876, se sometiera en cada caso el asunto al Consejo de Ministros para su resolución definitiva (art.2º), incluyéndose en este precepto

los edificios que por su mérito histórico o artístico reconocido se conservaran por el Ministerio de Fomento, y los que, hallándose en este caso, se destinaran a un servicio de la Administración del Estado en general (art.3º). Serían informados las Delegaciones de Hacienda de las provincias por la Dirección general de Propiedades y derechos del Estado de los terrenos y edificios cedidos, con arreglo a la ley 1º de junio de 1869 (art.4º).

***- La inspección de las Comisiones de Monumentos de los bienes inmuebles declarados Monumentos Nacionales Histórico-Artístico: La aplicación del artículo 21 del Reglamento de 1865 en relación a la tutela del Patrimonio Monumental.***

Se subraya en los reales decretos la obligación que el Estado asume sobre la conservación del bien inmueble declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico, *a fin de que no sufra detrimento su integridad y belleza artística*. Con este fin se irán delimitando una serie de instituciones administrativas del Patrimonio Monumental especialmente las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos y el Negociado de Construcciones Civiles. En la lectura de todos los reales órdenes se establece que aquellos bienes inmuebles que hayan sido declarados Monumentos Nacionales Históricos Artísticos serían *encomendados su custodia e inspección a la Comisión de Monumentos de aquella provincia*. La vigencia del Reglamento de 1865 durante esta etapa aparece reflejado en algunas instancias enviadas a los Gobernadores Civiles para que impidieran las enajenaciones o demoliciones de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico, como fue el caso Oficio de traslado de la Comisión de Monumentos de Toledo del 21 de mayo de 1901 al Gobernador Civil en el que se informaba la pérdida patrimonial que habían ocasionado dos vecinos de Torrijo al haber adquirido el palacio de los duques de Maqueda, ubicada en dicha localidad, con la intención *de realizar ganancias con el producto de la venta de los materiales resultantes, dándose ya a principio a la demolición y aunque los trabajos no deben avanzar mucho por las precauciones que exige el estado ruinoso de gran parte del edificio, se han vendido ya maderas, ladrillos, azulejos, y si no mienten los informes, está poco menos que concertada con varios anticuarios la venta de la portada de estilo ojival en su último periodo y de los preciosos artesonados mudéjares que coronan los solares del piso principal, siendo de temer que no pocas de estas joyas artísticas vayan a parar a manos de los extranjeros*. Se instaba al Ayuntamiento de Torrijos que suspendiera tal demolición fundamentando su iniciativa en el papel que le correspondía *a las Comisiones provinciales de Monumentos para representar contra la inmediata enajenación o destrucción de los edificios de verdadero mérito o interés nacional, cualquiera que sea el pretexto que se alegue al intentar su ruina, de conformidad con lo prevenido en el artículo 21 del Reglamento de 24 de noviembre de 1865, reformado por la Real Orden de 30 de diciembre de 1881*.



**- La tutela de los edificios civiles durante la Regencia de María Cristina y su impronta en el Patrimonio Monumental: El Real decreto de 15 de enero de 1886.**

La organización de las Construcciones Civiles fue un paso determinante a la hora de tutelar toda obra de edificación y reparación que se realizarían a los edificios públicos, en virtud de la promulgación del Real decreto de 15 de enero de 1886. En la exposición de Motivos ya se definía institucionalmente dicha institución, con su correspondiente objetivo: *Con la denominación de Construcciones Civiles, y a cargo del crédito especial consignado en el presupuesto de los gastos de este Ministerio, se llevan a cabo las obras de edificación y de reparación correspondiente a los diversos establecimientos e institutos que de este centro dependen, así como las de restauración de los monumentos históricos y artísticos en cuya existencia está interesada la gloria de la Nación.* Nuevamente se le daría en este ámbito un papel predominante a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: (...) *al efecto entiende que solo a la Real Academia de Bellas Artes debe pedirse informe, porque para obras de edificación urbana y con carácter esencialmente artístico casi siempre aquella Corporación es la más competente sin duda alguna, y en su ilustrado dictamen hallará siempre la Administración cuanto pueda necesitar para la resolución acertada de estos asuntos.* Se formalizaba un riguroso procedimiento administrativo por el que para efectuar obras de nueva construcción o de reparación de edificios con cargo al crédito de Construcciones Civiles comprendido en el presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento, debían ser necesarios: 1º) La formación del oportuno proyecto facultativo en virtud de Real orden motivada a que se acompañaría los programas de la obra en que se expresasen detalladamente las condiciones de localidad y distribución que ha de tener; 2º. La aprobación del proyecto formado de conformidad con lo prevenido en la Real Orden que le de origen, previo informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y 3º La promulgación del Real decreto del Ministerio de Fomento, con acuerdo del Consejo de Ministros, disponiéndose la ejecución de las obras. No sería necesario Real decreto para las obras de reparación o conservación cuyo presupuesto no exceda de 100.000 pesetas, aunque se publicaría en la Gaceta la Real orden que lo disponga (art.1º). El procedimiento administrativo de subasta pública quedaba establecido como ejecución de dichas obras, por lo que *solo entiende que pueda prescindirse de este sistema, cuando la excepción se halle perfectamente justificada* (...) excepto los casos previstos por las disposiciones vigentes y en los que por razones de gobierno y de conveniencia pública se quieran adoptar temporalmente el sistema de administración. Podrá hacerse por este último sistema las restauraciones de los edificios declarados monumentos históricos o artísticos y toda ornamentación o decoración que tuviera el carácter propio de las obras de arte (art.2). En todo proyecto de obras se fijaría el máximo de tiempo que ha de invertirse en su ejecución, comprendiéndose este plazo con cláusula penal, como una de las condiciones del pliego de las de subasta (art.3º).

El Servicio de Construcciones Civiles sería dotado de una precisa organización administrativa, estaría a cargo del personal facultativo que nombre el Ministerio de Fomento (art.4º), habiendo en Madrid tres Arquitectos Directores con tres Auxiliares correspondientes: uno tendría la categoría de Jefe de Administración de primera clase, otra de segunda y otra de tercera (art.5º). Se reduciría este personal cuando resultare innecesario su sostenimiento por haber disminuido las obras en construcción. Por el contrario, si éstas aumentasen considerablemente en número e importancia, se nombrarían por el Ministerio de Fomento los Arquitectos Directores o Auxiliares que fueren notoriamente necesarios, los cuales cesarían tan luego como terminen las circunstancias que hicieron preciso su nombramiento (art.6º). La inspección de las construcciones, ya se hicieran por contrata o por Administración, estaría a cargo de Juntas de obras, que se compondrían de un Presidente, nombrado por el Ministro, y que, en caso de importancia, podría ser un individuo del de Instrucción Pública, del de Agricultura, Industria y Comercio, de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, o de las Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes y de la de Ciencias; Dos o más Vocales, nombrado en virtud de propuesta de Corporación o instituto que corresponda el edificio en obras; Un Arquitecto, individuo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el carácter de Inspector facultativo, nombrado en virtud de propuesta en terna de dicha corporación; El Arquitecto Director de las obras, que no tendría voto en las deliberaciones de la Junta y un Secretario, que tendría además el cargo de Interventor en las obras por Administración (art.10). Estas Juntas dependerían inmediatamente de la Dirección general a cuyo servicio corresponderían las obras, y con arreglo a las instrucciones que de la misma recibieran, teniendo que desempeñar las siguientes funciones: 1º) Inspeccionar, vigilar y enterarse de la marcha que llevasen las obras y de los incidentes que ocurrieran en las mismas y que pudieran afectar a su terminación en el plazo establecido y con arreglo al proyecto aprobado; 2º) Examinar y remitir con informe a la Dirección general respectiva las certificaciones de obras, las liquidaciones, presupuestos adicionales, listas y cuentas de los gastos de toda clase que ocurran. En el caso de que las obras no se hicieran por subasta, los Arquitectos someterían a la aprobación de las Juntas todos los contratos parciales que celebrarían para ejecución de aquellas; 3º) Hacer la recepción provisional y definitiva de las obras y suscribir el acta correspondiente, y 4º) Remitir al Ministerio, por conducto de la Dirección correspondiente, los datos necesarios para la publicación de los estados y Memoria que previniera el decreto (art.11). El Ministerio de Fomento publicaría en la Gaceta todos los trimestres una relación en que se consigne el estado de cada una de las obras a que se refiere este Decreto, el importe de los libramientos expedidos para pago de los mismos, y un resumen general de los sueldos y de los gastos para material de oficina, con las observaciones necesarias para dar a conocer las incidencias en que las obras

hayan ocurrido. El Ministerio publicaría una Memoria anual, relativa a las obras que se hubiesen realizados, insertándose se la parte más principal de los proyectos, los resúmenes de gastos y todas cuantas noticias se obtuvieran de la marcha y vicisitudes de las mismas. Se unirían dicha Memoria láminas que representen los planos y dibujos que por su importancia merezcan ser dados a la luz pública (art.12).

Como aplicación de la nueva regulación administrativa se promulgó el Real decreto de 21 de diciembre de 1888, que aprobaba el proyecto del arquitecto Adolfo Fernández Casanova, para evitar la ruina de una parte del crucero de la Catedral de Sevilla, habiendo sido informado favorablemente por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (art.1º), aprobándose igualmente el presupuesto de coste de dicha portada en la parte de arquitectura y de talla por la cantidad de 421.357 pesetas y 15 céntimos, deducidos ya los donativos hechos (art.2º), llevándose a cabo estas obras en atención al carácter monumental del edificio, por el sistema de administración, y su referido importe se abonaría con cargo al crédito concedido para construcciones civiles en los presupuestos de gastos del Ministerio de Fomento (art.3º). Con la promulgación del Real decreto de 26 de diciembre de 1890 sería aprobado el reglamento de construcciones civiles, estableciéndose en su artículo primero que el servicio de construcciones civiles del Ministerio de Fomento constituiría un Negociado común a todas las Direcciones generales del mismo, desempeñándose sus atribuciones bajo la dependencia de cada uno de ellas, según el ramo de construcción a la que perteneciera. La Junta de Construcciones Civiles quedaría formada por tres Arquitectos, que a su vez serán Inspectores de las obras en ejecución; un Profesor de la Escuela Especial de Arquitectura, y un Jefe de Administración (art.4º). Presidiría la Junta uno de los Arquitectos Inspectores designados de Real orden, y auxiliará sus trabajos como Secretario, asistiendo a las sesiones con voz, pero sin voto, otro arquitecto de Real nombramiento también (art.4º). La dotación presupuestaria para la ejecución de obras tanto de nueva construcción como de reparación de edificios, o de restauración de monumentos, quedaría formalizado mediante un procedimiento administrativo en la que se formalizaría con la formación del proyecto y su aprobación, previo informe de la Junta de Construcciones Civiles y demás Corporaciones que la Dirección general estime conveniente oír cuando el presupuesto pase de 10000 pesetas. La aprobación de los proyectos se hará por Real decreto, acordado en Consejo de Ministros, cuando el importe del presupuesto exceda de 100000 pesetas; por Real orden cuando esté comprendido entre 100000 y 5000, y por las Direcciones generales en los demás casos (art.14). Las obras, siempre que su presupuesto exceda de 10.000 pesetas, se realizarían por contrata con las formalidades establecidas en la legislación de Obras Públicas. Se exceptuarían las de restauración de monumentos artísticos e históricos, cuando la Real Academia de Bellas Artes

así lo proponga, y todas aquellas cuya urgencia o condiciones especiales aconsejen llevarlas a cabo por Administración (art.16).

**- La adquisición de inmuebles de interés histórico y artístico a los particulares por el Estado como tutela pública del Patrimonio Monumental: La adquisición de los restos del templo de San Isidoro en Ávila y su traslado a Madrid.**

Una medida de salvaguarda del Patrimonio Monumental fue su adquisición y traslado por el Estado a instancia de las Reales Academias, como ocurrió en el caso de los restos del templo de San Isidoro en Ávila y su posterior traslado a Madrid. Así el 29 de noviembre de 1893 elevaría la Real Academia de la Historia una instancia, cuyo ponente fue el académico Juan de Dios la Rada y Delgado, en la que se solicitaba al Gobierno la adquisición y traslado de los restos de la iglesia románica de San Isidoro en Ávila: *Esta Real Academia cree que ni por un instante puede ponerse en duda la conveniencia de que tan preciada joya artístico-arqueológica se presente de nuevo al estudio como en un tiempo estuvo, siendo uno de los monumentos que, a no dudarlo, llamarían más la atención de propios y extraños en esta corte (...) Esta Real Academia cree por todo lo expuesto deber aconsejar al Gobierno de S.M. la adquisición de este pequeño templo, que fácilmente puede armarse en el amplio jardín que se extiende delante del nuevo local destinado a Museo Arqueológico Nacional, donde tan dignamente van estando representadas las diversas épocas de la historia del arte arquitectónico de España. La adquisición de este templo puede hacerse a poca costa, pues según las noticias de este Cuerpo literario, es relativamente pequeña la cantidad que su poseedor pide por él, aviniéndose a cobrarla en los plazos y tiempo que se le fijasen.* En 1884 por un precio de 18.000 pesetas las ruinas serían vendidas al Estado, siendo trasladadas al Museo Arqueológico de Madrid, para posteriormente el 20 de enero de 1896, las ruinas fueron cedidas al Ayuntamiento de Madrid, y el 9 de marzo del mismo año se emplazaron en los jardines del Buen Retiro.

### **3.4. Los conflictos competenciales entre las Reales Academias de las Bellas Artes de San Fernando y de la Historia y las Corporaciones Municipales en el deber de conservación del Patrimonio Monumental.**

Durante el periodo de la Regencia se van a ir incrementando los conflictos de competencia entre las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y las Corporaciones Municipales en la tutela pública de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico, tanto en los intentos de derribos a instancia de las autoridades municipales como pudo ser en el caso de la torre de Santa Clara de Zamora o en la propia restauración de inmuebles, como ocurrió con la torre de los Serranos de Valencia.

#### **3.4.1. El impedimento del derribo de la torre de Santa Clara de Zamora por parte de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.**

Al igual que hubo ocurrido con el Arco de San Lorenzo, en el caso de la conservación de la torre de Santa Clara de Zamora, la intervención de la Real Academia de la Historia y de la de Bellas Artes fueron primordiales a la hora de proteger el inmueble. En el Informe de la Real Academia de la Historia sobre el derribo del torreón de Santa Clara de Zamora se exigía que se cumpliera las prescripciones del Real decreto del 16 de diciembre de 1873, por lo que se proceda a restaurar el torreón hasta dejarlo en el estado y forma que tenía. Se precisaba como *para dar mayor facilidad al tráfico y logre pasar a los carruajes por la calle de Santa Clara, que es de las principales de la ciudad, acordó el ayuntamiento el derribo de la puerta de la muralla (...) publicando subasta y señalando día para empezar la demolición, con la inteligencia de obrar con arreglo a las atribuciones de la ley municipal. Se reunió por este motivo la Comisión de Monumentos presidida por el Señor Gobernador, acordó a su vez pasar el caso en conocimiento de esta Academia y de las Bellas Artes de San Fernando, como su reglamento preceptúa, y lo comunicó a la Corporación concejil, rogando suspendiera el derribo en tanto recayera resolución superior, pero por contestación expresa el Ayuntamiento, que no tratándose de edificio declarado monumento artístico e histórico, comunica a la comisión competencia para mediar en el asunto (...) dio parte al Señor Director General de Instrucción Pública, el cual celosamente ordenó la suspensión.* En una minuta de oficio de 1890 la propia Real Academia de la Historia volvería a denunciar la actitud de incumplimiento de la Corporación Municipal, más aún cuando habían sido declaradas monumentos nacionales por Real Orden de 26 de agosto de 1874, relatándose los acontecimientos que habían llevado al conflicto institucional entre la Corporación Municipal y el propio Gobernador Civil en su calidad de Presidente de la Comisión de Monumentos: *El Gobernador de la Provincia, como Presidente de aquella Comisión de Monumentos, bajo cuya inspección y custodia puso la ley aquellos dos interesantes edificios, denunció a esta Real Academia, el propósito vandálico de la municipalidad, y como autoridad superior acordó que se suspendiese la obra de demolición comenzada. La Academia esperaba que esta acertada medida de suspensión sería puesta oficialmente en conocimiento de V.E. y que de ese Ministerio de su digno cargo partiría la orden oportuna para que el Gobernador la mantuviera hasta tanto que en todo caso debía proceder a la demolición. Más con sorpresa recibió un segundo oficio de aquella autoridad local con fecha del 22 de mayo en que se la manifestaba hallarse ya casi terminada la demolición de ambos monumentos, alegando el Ayuntamiento como causa bastante para no cumplir el decreto de suspensión del Gobernador, el hallarse aquellos en estado ruinoso y de peligro para el tránsito público, según informe del maestro de obras de la municipalidad. Y tomando la Academia en consideración el hecho punible del referido ayuntamiento, consumado sin formulación de expediente, sin oír a la Comisión Provincial de Zamora y dando al desprecio todas las disposiciones legales que amparan a los monumentos históricos y artísticos declaradas nacionales, en su sesión del 20 de mayo pasado próximo, acordó elevar a V.E. respetuosa y sentida queja de la conducta de aquella autoridad municipal a fin de que no pueda imponer semejantes actos, que sobreesde el prestigio de la ley y de*



*las corporaciones encargadas de cumplirlas.* El Ministro de Fomento dispondría por Real orden que 1º) Que por el Gobierno Civil de aquella provincia se suspenda todo acto o intento de demolición del referido arco y 2º) Que se instruya inmediatamente el oportuno expediente oyendo a la Comisión de Monumentos y al Arquitecto Provincial, sobre la posibilidad de conservar el citado recuerdo histórico, timbre glorioso de la edad media zamorana.

### **3.4.2. La impronta de las Reales Academias de Bellas Artes en las disposiciones municipales sobre la restauración monumental: El papel de la Real Academia de San Carlos en la restauración de las torres Serrano de Valencia.**

En la sesión celebrada el 23 de enero de 1893 acordó rogar a la Academia designarse una Comisión para dictaminar acerca de las obras de restauración de las torres, *a fin de que la citada restauración resultase completa, según la grandiosidad que el monumento exige.* La Academia aceptaría el encargo municipal y confió a la Sección de Arquitectura la redacción del Informe, para los que se designarían a los arquitectos y académicos Antonio Martorell y José Calvo, y el publicista José Serrano. El 28 de mayo de 1893 la ponencia estaría elaborada y el 2 de junio lo recibiría el Ayuntamiento. En el Informe se exponía una amplia información histórica del Monumento arquitectónico así como una exhaustiva descripción artística y los trabajos de restauración que fueron realizados bajo la dirección de la autoridad municipal<sup>2551</sup>. A continuación se propone cual sería el proyecto de restauración acorde con el Monumento Histórico<sup>2552</sup>. La cuestión de la escalera va a ser objeto de una amplia polémica en el ámbito de la restauración, donde se puede apreciar el amplio debate en el seno de la teoría de la restauración está surgiendo en este momento en la práctica de la política monumental, así como las controversias en que estaba en este momento existiendo entre cuales eran

---

<sup>2551</sup> DORDA, Juan “Las torres de Serranos. Documentos Académicos (1392-1871)”, *Archivo de Arte Valenciano*, Año 1, 31 de marzo de 1915, p.8: *Sabido es que este edificio ha estado destinado a cárcel durante muchos años hasta el de 1887, en que fueron trasladados los presos que la ocupaban al ex convento de San Agustín. El Excmo. Ayuntamiento, conocedor de las condiciones artísticas de tan bello monumento, acordó que se procediera a la demolición de las obras extrañas a la primitiva, que se habían hecho por necesidades carcelarias, y que se limpiasen los parámetros sucios (...) Desaparecidas estas partes de obra extrañas al monumento, se empezó la restauración propiamente dicha (...).* p.8.

<sup>2552</sup> DORDA J., pp.8-9, *¿Cuáles serán las obras que completen esta interesantísima restauración y que devuelvan a la Puerta de Torres de Serrano su antiguo esplendor y la pureza de forma y de estilo con que salió terminada de manos del artista?. Difícil le sería a esta Comisión formular cumplidamente el dictamen que el Excmo. Ayuntamiento se ha servido pedir a esta Real Academia si no hubiese procurado estudiar, como lo ha hecho, los antecedentes históricos (...) De ello deduce que la restauración no será completa ni el Excmo. Ayuntamiento conseguirá su laudable propósito de devolver al Monumento su antiguo esplendor y su primitiva pureza como notabilísima concepción artística, si no se procede con inquebrantable decisión, y empleando todos los medios necesarios, a realizar los siguientes trabajos: 1º. Restablecimiento del foso, con la amplitud necesaria para que queden visibles los taludes que forman el basamento de las torres, y reconstrucción del puente de ingreso a la Ciudad; 2º) Aislamiento de esta soberbia obra, dejando ancho espacio a su alrededor, para que pueda admirarse por todos sus lados (...).*

las instituciones que estaban encargados de la protección monumental<sup>2553</sup>. La Corporación Municipal emitiría el correspondiente informe a la Academia por la colaboración prestada al Municipio.

### **3.5. Una ineficaz regulación normativa sobre excavaciones arqueológicas en el periodo de la Regencia: La regulación jurídica en función al dominio del fundo a excavar.**

Durante el periodo de Restauración nuevamente nos encontramos con una verdadera laguna legal en torno a la regulación de las excavaciones arqueológicas, especialmente con la propiedad de los bienes arqueológicos descubiertos.

1º) La necesidad de promulgar una ley de antigüedades que pudiera suplir esta carencia vuelve a ser objeto de crítica al Estado por parte de algunos eruditos como fue el caso de Navarro y Ledesma, publicando en 1897 un artículo en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos con el título de Necesidad de una Ley de Antigüedades.

2º) El desarrollo de un derecho supletorio en el ámbito de la regulación de las excavaciones arqueológicas, como fue la promulgación del Código Civil de 1889, la ley de Minas de 18 y especialmente la Ley de Expropiación Forzosa de 1879, que permitió al Estado la declaración de utilidad pública a la hora de expropiar aquellos terrenos que consideraría primordiales para continuar las excavaciones, como fue el caso de la ciudad de Numancia.

3º) Las prerrogativas del derecho del propietario privado de los bienes arqueológicos, tanto en manos de particulares como de las distintas instituciones que irían apareciendo en

#### **3.5.1. La necesidad de una Ley de Antigüedades: Una pretensión defendida por la erudición española.**

En 1897, Navarro y Ledesma publicó en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos un interesante artículo con el título *Necesidad de una Ley de Antigüedades*, en un momento en que se estaba configurando una legislación específica en otros países europeos: *Difícil por todo extremo es la misión que nuestro cuerpo facultativo se halla encargado, y sobre difícil, poco brillante y menos recompensada con el premio a que principalmente debe aspirarse en todo trabajo intelectual, es decir, con el aprecio y la estimación de quienes aprovechar los resultados de ese esfuerzo pueden. Otros han hecho y hacen la*

<sup>2553</sup> DORDA, J. *Expuesta en otro lugar de este dictamen el concepto que a esta Comisión merece la escalera descubierta que se adosa por el interior de la Ciudad a la torre izquierda (...) no creyendo que aquella formó parte del primitivo edificio, vacila esta Comisión al exponer su criterio respecto a lo que debería hacerse, creyendo prudente remitir a la decisión del Excmo. Ayuntamiento el hecho radical de conservarla o demolerla. Debe, no obstante, sentar la consideración de que hoy constituye el único medio cómodo de subir a las torres, y si bajo el concepto puramente artístico parece que debiera demolerse, no dejan de existir importantes motivos para su conservación, puesto que no se halla determinado el ulterior destino que ha de darse al edificio. A parte de que considerada separadamente la escalera como obra de arte, reúne condiciones de grandiosidad y de belleza.*

*Historia: nosotros sólo tenemos la obligación de conservarla, examinando, recogiendo y guardando, o mejor, depositando en sitio donde todo el mundo pueda verlos y estudiarlos a su sabor, los vestigios y reliquias que de todos los tiempos nos quedan y procurando entresacar el dato luminoso y útil de entre el montón de los cachivaches de antaño y separar las antigüedades de las simples antiguallas. Este trabajo a cuya necesidad debemos nuestra existencia en el organismo de la nación, no puede ser completo ni fecundo si no cuenta con todos los auxilios posibles: en primer término con el auxilio del Estado, en segundo, con la ayuda eficaz de los particulares, y por fin, con la fuerza de la solidaridad internacional y del respeto que ésta impone a los objetos, que, formando parte de la historia de un pueblo, constituye un fondo importantísimo del patrimonio que éste heredó y que nadie tiene derecho a disputarle ni a arrancarle, aunque para ello se valga de los procedimientos legales de adquisición, de los que semejante herencia debe de estar en absoluto exceptuada. Para hablar con más precisión, diremos que es un principio aceptado casi universalmente el de que las antigüedades útiles y valiosas para el estudio de la historia patria, no deben ni pueden ser objeto de comercio internacional, no deben ni pueden salir de la nación a que pertenecen, la cual tiene sobre ellas un dominio eminente, que debe ser cuanto antes consignado en la legislación. Ya lo está con más o menos restricciones, en las leyes de varios países, y de un modo absoluto y terminante, en las leyes italianas, que en este asunto deben servir de modelo y de norma. En España es frecuentísimo, y ha originado las más graves consecuencias, el empleo de los tópicos altisonantes y de la retórica barata para ponderar en forma oratoria las grandezas de la patria, las glorias de la tradición, etc. No habrá diez españoles medianamente ilustrado que no hayan tenido en la boca o en los puntos de la pluma los nombres de todas nuestras victorias y conquistas, de nuestros innumerables héroes, poetas, pintores y hombres de ciencia; pero es lo cierto que nada se ha hecho positivo, sólido, práctico, para esclarecer con el documento, con el dato arqueológico, en suma, con la fuerza de los hechos tangibles, averiguados y conocidos, la verdad verdadera que debe servir de apoyo y de cimiento a esos edificios levantados por la retórica. Un arma, un retablo, un pergamino, un sello, prueban más que cien discursos, y hora es ya de otorgar a los hechos históricos, conservados cuidadosamente, la atención que el criterio histórico moderno les presta y de aprovechar todo lo aprovechable en tal sentido. Lejos de esto, un día sí y otro también estamos viendo cómo desaparecen de España los testimonios más fehacientes de nuestra grandeza, las obras más peregrinas de nuestro arte y los más interesantes documentos de nuestra historia. A veces, por cualquier motivo, se hace pública una de estas desapariciones. Pero en la mayoría de los casos, nadie sabe cómo ni por dónde se pierde lo mejor de nuestras antigüedades, privándonos de una propiedad indiscutible y de un fragmento precioso de nuestra historia. La codicia o la necesidad van de esta manera enajenando los objetos que más caro debieran de sernos, aunque no nos moviera el interés científico, sino solamente el patriótico, porque tanto, por lo menos, como un pedazo de tierra conservado y retenido a fuerza de sacrificios enormes, tan solo por el honor de la patria, debe estimarse el documento en que se acredita o se funda un derecho, el cuadro en que se muestra un estado de cultura, el arma, la moneda (...)*<sup>2554</sup>.

---

<sup>2554</sup> NAVARRO Y LEDESMA “Necesidad de una ley de antigüedades” *Revista de Archivos*,

### 3.5.2. La impronta del Código Civil de 1889 en la tutela pública del Patrimonio Arqueológico.

Con la promulgación del Código Civil de 1889, se daría un paso fundamental referente a los hallazgos arqueológicos, ya aunque todavía se consideraba el tesoro oculto como un bien perteneciente al dueño del terreno en que se hallare, se presentaba como novedad el hecho de que cuando el descubrimiento se hiciera en propiedad ajena o del Estado, y por causalidad, la mitad se aplicara al descubridor, así como el propio Estado podría adquirirlo por justo precio si tuviera un amplio interés para las artes o las ciencias (artículo 351). De esta manera, los bienes arqueológicos serían identificados como tesoro y por consiguiente se estaba aplicando el régimen legal del tesoro oculto que la doctrina y la propia codificación civil habían delimitado. La construcción jurídica del Bien Arqueológico como un objeto material de valor antiguo que había perdido su dueño y que casualmente o a través de una excavación organizada se encontraba, enlazaba con la tradición legal y doctrinal española sobre los conceptos de ocupación, hallazgo y tesoro. De esta manera en el Libro Tercero del Código Civil que trata de las diferentes formas de adquirir la propiedad, se inicia con la afirmación de que la propiedad se adquiere por la ocupación. En el artículo 610 se establece que se adquiriría por ocupación los bienes apropiables por naturaleza que carecía de dueño, entre los que se encontraba los tesoros ocultos. Los restantes artículos contendría la llamada por la doctrina ocupación de las cosas inanimadas, por lo que según el artículo 614, el que por casualidad descubriese un tesoro oculto en propiedad ajena, tendría el derecho que le concedería el artículo 351 del Código, o sea, que se le concediera la mitad del beneficio. Todos los artículos referidos por el Código se ocupan de hallazgos de cosas muebles que carecen en principio de posesión, aunque en sí misma no hay una sola modalidad, sino que vamos a encontrar múltiples variedades, siendo la del tesoro la que nos va a interesar. Sin entrar ampliamente en la polémica doctrinal del concepto de tesoro, ya en el artículo 716 del Código Napoleónico se consideraba el tesoro como cosa encontrada oculta, proyectándose esta concepción en los códigos italianos decimonónicos, y en el propio Código Civil, concretamente en el artículo 352 en la que lo define como depósito oculto e ignorado, a lo que se uniría el desconocimiento de su legítima pertenencia, tesis que sería criticada por Pampaloni, pero que la mayoría de la doctrina ha recogido posteriormente. Desde esta perspectiva, Moreau apunta como a diferencia de la mayoría de los códigos del siglo pasado el español incorporó en la regulación del tesoro un precepto, existente ya en el proyecto de 1851, en su artículo 395, por el que se reconocía derechos al Estado sobre objetos descubiertos de interés científico o artístico, que se incorporaría en el Código Civil en el párrafo 3º del artículo 351 en la que se precisaba que aquellos efectos que fuesen interesante para la Ciencias o las Artes el Estado podría adquirirlos por su justo precio (art.395).

---

*Bibliotecas y Museos, 1897.*

La propia doctrina de la época consideraría esta potestad del Estado como una expropiación de bienes muebles, cuando aún todavía la Ley de Expropiación Forzosa solo contemplaba el caso de los bienes inmuebles (Ley de 10 de enero de 1879). Sin embargo, esto no significaba una adquisición automática de la propiedad de los objetos de interés artístico, sino que se trataba de una opción de adquisición en su favor del tesoro regularmente adquirido desde el descubrimiento por el dueño del lugar. Lo que se deduce que el Estado podría adquirir la propiedad del bien descubierto, no siempre, y cuando lo hiciese se daba en todo caso una verdadera adquisición por el descubridor y el dueño del lugar mediante, respectivamente, la ocupación y la accesión. Cabe mencionar como el criterio de la discrecionalidad del Estado en la adquisición sería defendida por la sentencia de la Sala 4ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1933 (Moreau, 1980, 664).

### **3.5.3. La impronta de la legislación minera en el ámbito de la regulación de las excavaciones arqueológicas.**

No cabe duda que el desarrollo de la legislación minera va a provocar una clara impronta en la configuración del Patrimonio Arqueológico español, a falta de una de una regulación de ley de excavaciones. La cuestión primordial que se va a producir en este momento en la legislación minera y que va a tener su clara proyección en la regulación arqueológica va a ser la cuestión de la propiedad de aquellos bienes que aparecen en el subsuelo. El jurista Joaquín Girón establece tres sistemas que fundamenta el hecho dominal de los bienes mineros, El primero, llamado sistema de la accesión, que es el que prevaleció en el derecho romano, por el cual se defendía la tesis de que la propiedad de las minas pertenecía a quien tiene ese derecho sobre la superficie que cubre las riquezas subterráneas, por la misma razón que le pertenecía todo aquello que se elevaba por encima del suelo, apoyado evidentemente en un respeto absoluto por el derecho de la propiedad. Un segundo sería el sistema regalista, que tendría su origen en Roma, y en el que se basaría en la adquisición de los bienes por el propio Estado, por lo que las minas serían de dominio público. Un tercer sistema que se iría abriendo camino sería el defendido por Joaquín Girón en el que defendería la tesis de que las minas no descubiertas como cosas nullius, por lo que se derivaría los siguientes matices: 1º) Las minas no explotadas son cosas comunes, como los animales y los fundos sin dueños ni poseedor, por lo que nadie con más títulos para apropiárselos que aquellos que han hecho investigaciones; 2º) Los reconocimientos de propiedad minera que haga el Estado por medio de sus agentes, deben limitar el radio hasta donde el minero pueda extender sus trabajos; 3º) Se impone al minero la obligación de respetar el suelo del propietario de la superficie; 4º) Los minerales que hay a flor de tierra, piedras, canteras, etc., son propiedad del superficiario, no por cesión que le haga el Estado de estos minerales, sino como accesorios inseparables de la propiedad del suelo; 5º) Cuando los trabajos de extracción de mineral se practiquen en el subsuelo de un propietario que no sea el mismo



minero, y se necesite ocupar el todo o parte de la superficie para realizar operaciones técnicas, tendrá derecho el minero a pedir y obtener de la Autoridad competente la expropiación forzosa de tal superficie, previo pago del valor en venta de ésta; 7º) El Estado, fundado en el mismo título que se apoya para exigir impuestos directos sobre toda riqueza productiva, tendrá derecho para percibir uno de carácter moderado, proporcional a los rendimientos que se obtengan de las mismas y 8º) Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a practicar excavaciones en los terrenos comunes y en los patrimoniales del Estado, la Provincia y el Municipio, para buscar mineral; más ese derecho desaparece respecto a las propiedades de los particulares, exceptuándose en los casos que sea autorizado por el propio dueño<sup>2555</sup>.

La irrupción de esta última tesis en el desarrollo de la legislación minera iría cuajando desde el periodo revolucionario del 68 hasta las disposiciones legales de esta etapa<sup>2556</sup>. En el Decreto Ley de 29 de diciembre de 1868, se había preceptuado ya en su artículo 6º que el suelo podrá ser de propiedad particular o de dominio público, y el dueño nunca pierde el derecho sobre él, ni a utilizarlo, salvo en caso de expropiación; el subsuelo se halla originariamente bajo el dominio del Estado, y éste podrá, según los casos y sin más regla que la conveniencia, abandonarlo al aprovechamiento común, cederlo gratuitamente al dueño del suelo o enajenarlo mediante un canon a los particulares que lo soliciten (...). Al mismo tiempo se dejaba abierta la regulación de las excavaciones mineras: Todo español o extranjero podrá hacer libremente en terrenos de dominio público calicatas o excavaciones que no excedan de 10 metros de extensión en longitud o profundidad, con objeto de descubrir minerales; para ello no necesita licencia, pero deberá previamente dar aviso a la Autoridad local. En terrenos de propiedad privada no se podrán abrir calicatas sin que preceda permiso del dueño o de quien lo represente (art.10). En el Proyecto de ley de minas de 13 de junio de 1879 ya se establecerían algunos conceptos vitales a la hora de ir delimitándose la concepción dominal de los bienes mineros. Se establecería para ello una clasificación de las sustancias minerales, que definía el dominio de los mismos. Artículo 1º. Son objetos de la presente ley las sustancias del reino mineral, cualesquiera que sean su origen y su forma de yacimiento, hállese en el interior o en la superficie de la tierra, y para su aprovechamiento se dividen en dos secciones. Art.2º. En la primera sección se comprenden las producciones minerales de naturaleza lapídea y terrosa (Art.3º). La segunda sección comprende las sustancias metalíferas combustibles y salinas (Art.4º). La propiedad de las

<sup>2555</sup> GIRÓN Y ARCAS, Joaquín *El derecho de minería en sus fundamentos e historia vigente en España* Madrid, 1909.

<sup>2556</sup> FERNÁNDEZ ESPINAR, Luis Carlos, *Derecho de minas en España (1825-199)*, Madrid, Comares, 1997.

sustancias de la primera sección pertenece por completo al dueño del terreno en que se encuentren, siendo de aprovechamiento común cuando se hallen en terrenos de dominio público, o del Estado, de las provincias o de los pueblos y de explotación particular cuando el terreno sea de propiedad privada. Estas explotaciones solo estarán sujetas a la intervención administrativa en lo que se refiera a la seguridad y salubridad de las labores, según determine el reglamento de inspección y policía mineras. Podrá, sin embargo, solicitarse y otorgarse la concesión de estas sustancias cuando se hallaren en terreno de dominio público o del Estado, en cuyo caso quedará sujeto el que la obtenga a las condiciones y gravámenes que esta ley establece; art.5º. El dominio pleno de las sustancias comprendidas en la segunda sección corresponde al Estado, y nadie podrá explotarlas sino en virtud de concesión otorgada por el Gobierno con arreglo a las prescripciones de esta ley. Capítulo II. Art.6º. Todo español o extranjero podrá hacer libremente en terrenos de dominio público o del Estado, de las provincias o de los pueblos calicatas o excavaciones que no excedan de cinco metros de extensión en longitud o profundidad con objeto de descubrir minerales; para ello no se necesita licencia: pero deberá darse aviso previamente a la Autoridad local, determinando con precisión el sitio en que se propone abrir la calicata; Art. 7º. En terrenos de propiedad privada no se podrá abrir calicatas sin permiso por escrito del dueño o de quien lo represente<sup>2557</sup>. La Real Orden de 17 de junio de 1893 declaraba que el Estado era originariamente dueño del subsuelo, y por tal motivo, puede en todo tiempo y en todo caso otorgar a quien lo solicite, con los requisitos y formalidades que al efecto se exigen, la concesión de cualquiera de las sustancias comprendida en la tercera sesión legal, sin que el propietario de la superficie, puede en ningún caso serlo del subsuelo correspondiente a la finca de su propiedad, cuya disposición está confirmada por Real Orden de 15 de noviembre de 1897.

#### **3.5.4. Las excavaciones de Numancia como ensayo de la potestad del Estado de expropiación por declaración de utilidad pública en los terrenos privados que contuviese objetos arqueológicos: El Informe de la Real Academia de la Historia de 1896.**

La actitud de los propietarios de los fundos no tuvo siempre un carácter colaboracionista, ya que muchas veces eran reacios a que fueron excavados sus terrenos, la mayor parte dedicados a labores agrícolas. Evidentemente se pedía una compensación económica que en la mayoría de los casos tenían que ser financiado por el propio arqueólogo. Se daba la circunstancia que en otros ámbitos del derecho se estaba cuajando tesis de expropiación pública, más aún desde que se había puesto en vigor la ley de expropiación pública de 1879, por lo que se empezó a concebir que en aquellos casos en que la excavación arqueológica fuera realizada por iniciativa pública en un fundo privado, el

---

<sup>2557</sup> Colección Legislativa, 1º Semestre de 1879, Tomo CXXII, Segunda parte, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1880, pp.1221-1222; Gaceta de Madrid, 22 de junio de 1879.

Estado podría tener potestad de expropiar el terreno. Y esto es lo que ocurrió precisamente en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Numancia. Se corría el riesgo de que todo lo que había sido descubierto por Shulten y los investigadores alemanes una vez que se hubieran finalizado el plazo de tiempo en la que los agricultores habían cedido sus tierras para que se pudieran hacer las respectivas excavaciones. Para que no ocurriera esto era necesario que el Estado adquiriera los terrenos del cerro, como en este momento incluso apuntaba Vera siendo como debe ser aquel venerado suelo propiedad nacional, por lo que los trabajos de excavación podrían llevarse a cabo de un modo permanente y los resultados obtenidos no se perderían como había ocurrido hasta ahora. Toda la opinión pública, las instituciones culturales y política del momento comenzarían a reivindicar que el Estado adquiriese el terreno que ocupaba Numancia. El primer paso lo daría el Vizconde de Eza que donaría todo su territorio en pro de la identidad española<sup>2558</sup>. En los años sucesivos comienza a barajarse la posibilidad de ser expropiado el terreno, siendo incoado el expediente por el Gobierno Civil de Soria, para la declaración de utilidad pública. En el Informe de la Real Academia de la Historia de 1 de abril de 1896 se recomendaba la adquisición de los terrenos ocupados por las excavaciones de Numancia, 1 de abril de 1896. En el contenido del Informe se fundamentaba la causa de dicha expropiación, que se centraba especialmente por el interés general que representaba los descubrimientos arqueológicos que se habían ido encontrado en los terrenos particulares, cuyos dueños en muchas ocasiones habían impedido que se realizasen las continuas excavaciones que debían de realizarse en dichos fundos, al entorpecer las tareas agrícolas anuales: *No cabe duda acerca de la conveniencia de que el Estado adquiera los terrenos a que este expediente se refiere. En ellos se han hecho algunas excavaciones cuyos planos existen en nuestros archivos, y de las cuales han resultado el descubrimiento de algunas calles y restos de edificios de la ciudad romana. Sin poder disponer con entera libertad de aquel suelo, y excavar profundamente hasta la roca viva, no será factible ningún hallazgo relativo a la ciudad primitiva. Por otra parte, el Gobierno indemniza anualmente a los colonos y cultivadores de aquellos campos a causa del daño originado por la situación de aquellas excavaciones, que le impide labrar la tierra; y a la verdad, la exigua suma que por este concepto se abona hace esperar que sea reducido el capital necesario para la adquisición definitiva, acabando de una vez con aquel pequeño censo. Ante estas circunstancias, la Real Academia de la Historia apelaba al artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, por lo que era preciso, que una ley declare de utilidad pública los terrenos de que se trata, sin que el Ministro de Fomento pueda hacer por sí tal declaración, como parecen entendido varios de los informantes. La segunda es que para llegar a este resultado, el Gobierno necesita conocer con aproximación suficiente, el importe a que podrá ascender la expropiación, y ese dato no se encuentra en ninguno de los informes reunidos por el Gobernador.*

<sup>2558</sup> DE LA TORRE ECHEVARRI, José Ignacio “Numancia: Usos y abusos de la tradición historiográfica” *Complutum* 9, 1998, pp.193-201.

**3.5.5. La pervivencia del derecho de los propietarios privados a hacer excavaciones arqueológicas en sus fundos sin limitación de la potestad pública: La cuestión jurídica en torno al descubrimiento y adquisición extranjera de la Dama de Elche.**

La ausencia de una legislación que regulase las excavaciones arqueológicas proporcionó una coyuntura inestimable a cualquier investigador que deseara llevarla a cabo en nuestro país, lo que atraería a un gran número de arqueólogos extranjeros, como en fue el caso de Andalucía. Y es que en esta etapa se intensificaron las excavaciones arqueológicas por una amplia nómina de investigadores extranjeros como fue el caso de Bonsor en Carmona, entre 1885-1890, Arthur Engel y George Bonsor en Alcolea del Río (Sevilla) en 1890, Louis Siret en Villaricos (Cuevas del Almanzora, Almería) entre 1890 y 1914, George Bonsor en los Alcores de Carmona entre 1894-98 ó Arthur Engel o Pierre Paris en Osuna (Sevilla) en 1903-04. Su labor les llevaría a descubrir un gran número de piezas arqueológicas, hecho que alarmaría a la Real Academia de la Historia en la Circular del 12 de marzo de 1883 a los gobernadores provinciales advirtiéndoles del peligro que suponía el intervencionismo extranjero. Minuta de oficio del Secretario de la Academia a los Gobernadores Presidentes de las Comisiones de Monumentos: *Vivimos en una época de activas investigaciones científicas; los arqueólogos extranjeros recorren hoy con facilidad nuestras provincias, y sería mengua que los monumentos artísticos y epigráficos de nuestra antigua cultura, aún desconocidos, fueran publicados fuera de España antes que en nuestro suelo.* Una de las prácticas más comunes en esta etapa sería la venta de los bienes arqueológicos como fue el caso de Bonsor, quien vendería un amplio número de éstos a la recién fundada institución cultural de carácter privado, The Hispanic Society of América, convirtiéndose en uno de sus principales proveedores de antigüedades en España. Como apunta Maier, *esta circunstancia ha sido uno de los aspectos más criticados a Bonsor dependiente de una leyenda negra que conviene contemplar en sus justos medios. Efectivamente, Bonsor vendió una importante parte de antigüedades prehistóricas, protohistóricas y romanas procedentes en su totalidad de los Alcores, además de otras series de objetos, tales como una colección de azulejos, pinturas españolas y otros objetos artísticos y literarios. En este sentido debemos de señalar que, por una parte, estas ventas eran permitidas por la legislación que existía en España sobre la exportación de antigüedades. Cuestión que tanto Bonsor como Huntington eran conscientes y en el momento en que la ley de 1911 fue aprobada, estas ventas se interrumpieron definitivamente. Por otra parte, Bonsor nunca vendió ninguna pieza que no fuera destinada al Museo de la Hispanic Society, con lo que toda su colección se encuentra reunida en un mismo Museo, que por otra parte garantizaba su conservación y evitaba su dispersión. La finalidad de esta venta era compensar los enormes gastos que le ocasionaba Bonsor el mantenimiento de la propia Necrópolis de Carmona. Debemos tener en cuenta que el trabajo de Bonsor no proporcionaba ingresos sino más bien gastos, dado el carácter privado de su actuación.* De esta manera el 25 de mayo de 1905 sería nombrado como miembro del Hispanic Society, efectuando las ventas en cinco lotes, en 1905, 1906, 1908, 1909 y 1910. Algunas de las exploraciones arqueológicas que

realizaría sería sufragada por la propia institución arqueológica americana, como fue la realizada en los Alcores a finales de 1907. Hasta cierto punto la actividad de los arqueólogos privados, nacionales como extranjeros, no era del todo fraudulenta, ya que no estaba claro hasta qué punto podía ser impedido en cierta forma la creación de un verdadero mercado de antigüedades. Podemos afirmar por consiguiente que durante la etapa de la Restauración podemos distinguir dos modelos de autorización legal en función al dominio del fundo a excavar: 1º) Los que eran producidos en terrenos que pertenecían al Estado, que necesitan la autorización expresa de la Real Academia de la Historia, concretamente del Gabinete de Antigüedades, como encargados de la inspección de las antigüedades y 2º) Los que eran producidos en terrenos privados, para lo que necesitan solamente de la autorización del propietario del fundo donde se iba a realizar las excavaciones. En este caso, la intervención estatal era mínima, por lo que el comercio de antigüedades fraudulento en cierta manera no estaba limitado.



El indiscutible derecho de propiedad privada de los bienes arqueológicos encontrados en sus propias casas, y la limitación de las Comisiones de Monumentos a intervenir en las excavaciones que se estaban realizando en las mismas, incluso vendiendo a extranjeros los bienes encontrados en las mismas se puede observar en el Oficio de 2 de marzo de



1902 firmado por el académico de la Historia Claudio Boutelou, denunciando la actitud de los vecinos de Santiponce al excavar en los corrales de sus casas sin que la Comisión Provincial de Monumentos pudiera evitarlo al estar en terreno privado: *Con motivo del reciente descubrimiento en el inmediato pueblo de Santiponce de algunos mosaicos de valor que han sido adquiridos por personas de Madrid y Sevilla, la mayoría de los vecinos de dicho pueblo dedicándose actualmente al registro de los corrales de sus casas, removiendo las tierras sin orden ni concierto, extrayendo a diario objetos arqueológicos (...) y lo que es más triste, destruyendo totalmente las construcciones antiguas que se salen del país sin dar tiempo a reconocerlas y estudiarlas, y cuyos materiales venden a cualquier precio. Lo que en Santiponce ocurre causa mayor pena cuanto que por lo limitado de sus facultades no halla manera de evitarlo, máxime tratándose de excavaciones que se hacen en terrenos de particulares y por los mismos dueños. Pero ya que la Comisión no puede impedir lo que sucede en Santiponce, cree un deber comunicarlo a esa Real Academia por si ella encuentra cortapisa que poner a unas devastaciones tan general y continuada.*

Es sin duda en el debate jurídico que se produce en torno al descubrimiento y adquisición extranjera de la Dama de Elche donde podemos apreciar la pervivencia del derecho absoluto de la propiedad privada de los bienes arqueológicos descubiertos por particulares. El 4 de agosto de 1897 en la finca del doctor Manuel Campello tendría lugar el descubrimiento de la célebre escultura ibérica conocida con la denominación de la dama de Elche<sup>2559</sup>. Sería un muchacho de 14 años, el agricultor Manuel Campello Esclapez quien encontró la hermosa piezas de arte íbero, quien se lo comunicaría al capataz de la finca, Antonio Galiana, quien decidió llevarla en carrillo al dueño de la finca, el doctor Manuel Campello. Se sabe que éste estaba casado con Asunción, sobrina de don Pedro Ibarra i Ruiz, historiador local y archivero municipal, y que éste a su vez se lo comunicaría a un erudito francés que en este momento se encontraba en el lugar, Pierre Paris, del Instituto Bordeaux, por lo que al no haber ninguna ley que lo impidiera, y considerarse por consiguiente, como un bien montresco, es decir, bienes que no tienen propiedad aparente, convencería al doctor Campello que el mejor lugar donde podía ser protegida sería en el Museo del Louvre, que resignado aceptaría la definitiva venta, ya que no había en este momento una verdadera conciencia pública de la importancia de la pieza descubierta. En un principio por parte de las autoridades académicas españolas se cuestionaría su autenticidad, por lo que se convirtió en un obstáculo irreversible para una hipotética intervención estatal<sup>2560</sup>. El 18 de agosto se había consumado la venta y Pierre París entregaba a Campello 4.000 francos, que al cambio de aquellas fechas eran de 5.200 pesetas. La venta contaría con la oposición del archivero

---

<sup>2559</sup> GARCIA Y BELLIDO, A. *La dama de Elche y el conjunto de piezas arqueológicas reintegradas en España en 1941*. Madrid, 1943.

<sup>2560</sup> Algunas revistas del momento se hicieron eco del descubrimiento como fue de La Ilustración Española y Americana de 30 de agosto de 1897, N.XXXII, pp.126-127.

Pere Ibarra I Ruiz, e incluso el propio descubridor, Manuel Campello, que siempre afirmaría que en realidad la obra era de su propiedad, ya que en realidad él la había encontrado, y los tesoros pertenecían a los descubridores en comandita con el propietario de los terrenos, siguiendo los términos jurídicos que se encontraba insertado en el Código Civil, prácticamente recién aprobado en este momento a raíz de la Real Orden de 29 de julio de 1889. Sin embargo, Manuel Campello Esclapez lo había hallado por casualidad, por lo que de haberse tasado por el Estado, a él le hubiese correspondido la mitad de la tasación, pero como fue vendida a un particular, no tenía derecho de obligación al reparto. Otra cuestión fue la propia actitud del Gobierno, ya que a raíz de la promulgación del Código Civil de 1889, en la regulación del tesoro, se estableció un derecho de opción por parte del Estado de expropiar los tesoros interesantes para las ciencias o para las artes (art.351, párrafo 3º), y en el caso de la Dama de Elche, al ponerse en duda la autenticidad de la pieza, el Estado no ejercitaría su derecho a la expropiación<sup>2561</sup>. Léon Heuzey y Edmond Potier, en el Louvre, al haberse dado cuenta de lo valioso de la pieza, lograrían a su vez la adquisición. La prensa española despertó una verdadera campaña de reacción ante el hecho, y puso en cuestión la validez de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico, instando incluso a la promulgación de una nueva ley de antigüedades, que impidiera la exportación de estas singularidades arqueológicas. Así el 18 de agosto de 1897, Ibarra Ruiz en las Efemérides Illicitanas escribiría: Venta del Busto. Monsieur Pierre Paris ha comprado para el Museo del Louvre, el soberbio busto que posee Campello, hallado el día 4 en la Alcudia, por la suma de 4.000 francos. No sé lo que me pasa -30 de agosto de 1897- ¡Adiós al busto! Hoy se ha llevado el busto M. Paris ¿Y esto no tiene remedio? ¿Y no hay una ley en España que impida esto? ¿Acaso porque un hombre no tenga afición a estas cosas no se le puede impedir, en nombre de la cultura pública, en nombre de la historia patria, cuya hermosa página debe ilustrar un día, no se le puede impedir el que venda éste al extranjero? ¿Qué dirán los amigos de Madrid y del extranjero? Que yo no pueda que salga el busto... ¡De Madrid!... Aún no me han contestado, y Campello parece que tiene prisa en aprovechar la ocasión que tan sin esperar se ha presentado para vender el busto (...) Ciertamente es una lástima que semejante joya salga de Elche, y aún de España, pues creo que no hay otra igual en el mundo. En la Revista Moderna, Fernando Navarro Ledesma, manifestaría su indignación por la venta del busto y lamentaría que en España nadie había reclamado oficialmente su devolución. En la misma línea encontramos el artículo del erudito aragonés Pedro Gascón de Gotor, que saldría publicado en el periódico El Liberal en Madrid, exponiendo su opinión sobre la exportación de obras de arte y antigüedades, insistiendo en la necesidad de que fuese promulgada una ley que impidiera la exportación de antigüedades. En El Liberal de Alicante de

<sup>2561</sup> MOREAU BALLONG, José Luis *La protección legal del Patrimonio Arqueológico Terrestre en la Ley Estatal de 1985* en Duodécimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Actas, p.86.86.

1 de enero de 1898, Bart publicaría un artículo con el título *Una ley que se impone*, lamentándose que de un modo lento, pero continuo, los turistas, los sabios y los millonarios de allende el Pirineo se van llevando nuestras riquezas arqueológicas. Incluso en las Cortes se abriría un amplio debate que abrió el camino a la concienciación política de elaborar una verdadera ley de antigüedades<sup>2562</sup>. En el Louvre quedaría el busto íbero hasta 1939, que a raíz del estallido de la II Guerra Mundial obligaría a trasladarlo al castillo de Montaubau, cerca de Tolouse, en el sur de Francia. Gracias a las buenas negociaciones que se llevaron a cabo entre 1940 y 1941, pudo regresar a España, concretamente el 10 de febrero de 1941, siendo ubicada en el Museo del Prado. En estos años se van a dar unas circunstancias de salida de obras significativas del arte español como la venta del palacio renacentista del castillo del Marqués de los Vélez (Vélez Blanco, Almería) en 1904 al Museo Metropolitano de Nueva York; el patio gótico del Castillo de los Fajardos de Vélez Blanco al anticuario francés Golderg, que lo desmontaría y lo sacaría por el puerto de Cartagena hasta llevarlo a París, comprándolo el financiero norteamericano Georges Blumenthal y lo instaló en 1913 en el interior de su casa en Nueva York, posteriormente lo donaría en 1959 al Museo Metropolitano de Nueva York cuando la casa fue demolida.

#### **4. El epílogo de una etapa: La intervención administrativa en la tutela del Patrimonio Monumental en el último gobierno liberal de Sagasta, durante los Ministerios de García Alíx (1900-1901) y el conde de Romanones. (1901-1902).**

Antonio García Alíx (1852-1911) sería el primer titular del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, llegando a ser nombrado en 1902 académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando<sup>2563</sup>. A partir del 6 de marzo de 1901, el Ministerio quedaría a cargo de Alvaro de Figueroa, Conde de Romanones. En esta etapa se pondría las bases institucionales de la tutela pública del Patrimonio Monumental,

##### **4.1. Una modernización del sistema administrativo del Patrimonio Monumental.**

El nacimiento del Ministerio de Instrucción Pública en 1900 se convierte en el resultado de la intervención administrativa del Estado en el ámbito del Patrimonio Monumental<sup>2564</sup>. La publicación del Real decreto de 25 de octubre de 1901 sobre reorganización de las Comisiones de Monumentos

---

<sup>2562</sup> RAMOS FOLQUÉS, Alejandro *La dama de Elche*, Elche, 1974.

<sup>2563</sup> BUIREU GUARRO, Jorge Antonio García Alíx: un ministro del Regeneracionismo (1852-1911). Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1990.

<sup>2564</sup> BOLADO OCHOA, Gerardo, "Del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes a la Cartera de Educación, Cultura y Deporte. 100 ministros para un centenario" *Revista de la Educación*, núm.324, 2001, pp.113-142; *La educación en la España del siglo XX: Primer Centenario de la creación del Ministerio de Instrucción y Bellas Artes*, septiembre-octubre, Ministerio de Educación, 2000.

Históricos y Artísticos marca un punto de inflexión en la protección del Patrimonio Monumental, especialmente en el ámbito de los bienes arqueológicos. Se establecía una nueva organización institucional a la hora de organizar las Comisiones Provinciales, por lo que en representación de las provincias y de los ayuntamientos de capitales de provincia, formarían parte de las mismas, con el carácter de Vocales natos, y los Presidentes de las Diputaciones y los alcaldes de las capitales. Del mismo modo y al propio efecto se considerarían también como Vocales natos de dichas Comisiones los Rectores de las Universidades, los Directores de los Institutos generales y técnicos y los Jefes de los Museos Arqueológicos provinciales regidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (art.1º). Al mismo tiempo se daba un nuevo carácter a los bienes depositados en los museos, al dotarlo de una finalidad primordialmente académica, por lo que las colecciones y objetos de dichos Museos serían considerados como material de enseñanza para el estudio de las asignaturas de Bellas Artes, Industria, Comercio y Ciencias Históricas que se cursan en las Universidades e Institutos generales y técnicos (art.2), al mismo tiempo que se obligaba a ser divulgado mediante conferencias públicas de Arqueología y Bellas Artes por parte de los Jefes de los Museos Arqueológicos provinciales, dos veces al mes por lo menos, una en día laborable y otra en festivo, que serían anunciadas anticipadamente y dotándolas de un carácter práctico (art.3). El carácter de servicio público que representaba las colecciones de bienes arqueológicos y artísticos de estas instituciones públicas van abriendo nuevos horizontes en el ámbito de la divulgación patrimonial, por lo que se incitaba a los Cabildos Catedrales, Sociedades Económicas, Municipios, Diputaciones y Reales Academias para que exhibieran al público diaria y gratuitamente las colecciones artísticas o arqueológicas que poseyeran, e incluso con la posibilidad de que estos bienes fuesen depositados bajo inventario y recibo en los Museos Arqueológicos provinciales que estuvieran a cargo del Cuerpo facultativo, *en cuyo caso tendrían el derecho de retirarlas cuando lo estimen oportuno, y se rotularán los objetos o series con una indicación especial de cuál sea la Corporación a que pertenezcan en pleno dominio*, salvando de esta manera el correspondiente derecho de la propiedad (art.6). En la misma línea se haría un llamamiento a las Corporaciones civiles y eclesiásticas para que, en fomento de la cultura y enseñanza nacional, fueran abierto al servicio del público sus Archivos y Bibliotecas (art.7). Los Museos Arqueológicos provinciales encomendados al servicio del Cuerpo facultativo serían objeto cada dos años de una visita de inspección, que tendrá el carácter de forzosa (art.8).

#### **4.2. La catalogación de los bienes histórico-artístico: Un ensayo de la sistematización científica del patrimonio monumental desde la tutela pública.**

El 1 de junio de 1900 el Ministerio de Instrucción Pública dictaba una de las disposiciones más ambiciosas de la conservación del patrimonio español, la elaboración de catálogos monumentales del país, *la catalogación completa y ordenada de las riquezas históricas de la nación*. La idea habría partido de Juan Facundo Riaño, profesor de Historia del Arte de la Escuela de la Diplomática y Director General del Ministerio de Instrucción Pública, figura de sólida y amplia formación, que se especializó en las artes industriales, desempeñando un papel importantísimo en el panorama cultural de la Restauración y Eduardo Saavedra, siendo impulsado por el Gobierno Silvela. Esta medida se inscribiría dentro del programa renovador iniciadas por las reformas llevadas a cabo por el Ministro García Alix en junio de 1900, en el que se sometieron un profundo cambio del plan de estudio de las facultades de letras. Se situaba en la línea de los Monumenta o los Corpora llevados a cabo por países europeos y representaba la incorporación de un pensamiento afirmativo y organizador, dominado por los preceptos positivistas y los planteamientos racionalistas, por la historiografía liberal que traía de Europa nuevos vientos de cambios. De alguna manera, se trataba de buscar el acercamiento a las corrientes europeas del momento y orientar la disciplina hacia la profesionalización completa. El Catálogo Monumental de España iba a marcar el paso de las nuevas tendencias, algo así como un cambio en el que la moderna historia sustituía a la antigua escuela y literaria. Además, desde la Guerra de la Independencia, pasando por las guerras civiles, la desamortización y las revoluciones, el deterioro y la merma de nuestra riqueza monumental era alarmante y se precisaba un plan nacional de estudio y catalogación de todo este patrimonio, cuya importancia estaba empezando a ser apreciada peligrosamente fuera de nuestras fronteras. Curiosamente no había antecedente en Europa de catálogo semejante, lo que valoraba aún más la empresa; y en España el precedente más cercano había sido la publicación romántica que llevaba por título Recuerdos y bellezas de España.

La funcionalidad de la elaboración del Catálogo Monumental quedaba reflejado en la Exposición de Motivos: *Desde los comienzos de este siglo se viene reconociendo la alta conveniencia de llevar a cabo Catálogos completos de las riquezas artísticas de la Nación, que a un mismo tiempo sirvan de guía provechosa a los que se dedican al estudio de la Historia del Arte nacional, y de inventario seguro que garantice la conservación de riquezas inestimables expuestas a desaparecer a impulsos de la codicia de los propios o de los manejos empleados para adquirirlas por los extraños. Se necesitaba a su vez realizar una selección patrimonial de manera sistematizada científicamente que hasta el momento se había carecido: Aquella iniciativa provechosa no ha sido ciertamente seguida con persistente solicitud, y si bien es cierto que existen preciosos datos sobre determinados monumentos, no lo es menos que queda por realizar la obra ordenada, no catalogar*



sólo éste o aquel monumento histórico o artístico de los muchos que atesora la Nación, sino llevar a efecto labor de método que permita llegar a poseer un Catálogo completo de todo aquello que revista en la Historia o en el Arte un reconocido mérito. La catalogación se haría por provincias, no pasando de una a otra sin que esté completamente terminado el Catálogo histórico y artístico de aquella en que se haya comenzado la investigación, (art.2), formándose un tomo o cuaderno en el que se comprendería todas las riquezas monumentales y artísticas existentes en cada provincia (art.3º). Serían las Reales Academias de Bellas Artes y de San Fernando las que propondrían la persona o personas encargadas de la formación del Catálogo Monumental o histórico, a fin de que reúnan la competencia y condiciones necesarias para el importante trabajo que se les encomienda (art.4º). Los gastos que ocasionasen la formación del Catálogo se satisfaría con cargo a la partida consignada a este objeto en el cap.4º del presupuesto vigente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.5). El primer catálogo que se elaboraría sería el de la provincia de Avila (art.6). El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, oyendo a la Real Academia de San Fernando, dictaría las instrucciones necesarias para llevar a cabo lo dispuesto en este decreto, y fijaría el plazo dentro del cual terminase el Catálogo en la provincia que fuera objeto de la investigación artística (art.7). La labor científica de catalogación sería encomendada a raíz de la **Real orden de 1º de junio de 1900** al historiador del arte Manuel Gómez-Moreno Martínez, un joven historiador de arte que ofendería a académicos de gran prestigio, como fue el caso de Amador de los Ríos<sup>2565</sup>, con una asignación mensual de 800 pesetas como indemnización y para atender a los gastos que ocasione la formación del Catálogo, con cargo al Capítulo 4º, art.4º del presupuesto de este Ministerio (art.3), estableciéndose que las Corporaciones y Autoridades de la citada provincia prestarían al académico la cooperación y auxilio que necesitara para llevar a cabo el importante trabajo que se le confía (art.4). Se le daría un periodo de ocho meses el plazo para terminar la confección del Catálogo (art.5)<sup>2566</sup>.

La elaboración del Catálogo no nació libre de una severa crítica desde la fila de algunos sectores de eruditos que en algunas páginas de revistas especializadas pondrían énfasis en algunas de las carencias aparecida desde su génesis. De esta manera en un anónimo artículo de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos se ponía en entredicho su propia utilidad: *Un Real Decreto de 1º de junio de 1900 dispone que se procederá a la formación del Catálogo Monumental y Artístico de la Nación, para que á un mismo tiempo sirva de guía provechosa á los que se dedican al estudio de la Historia del arte nacional, y de inventario seguro que garantice la conservación de riquezas inestimables expuestas á*

<sup>2565</sup> GOMEZ MORENO, María Elena *La Real Academia de San Fernando y el origen del Catálogo Monumental en España*. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1991.

<sup>2566</sup> CONDE DE ROMANONES, *Notas de una vida*, Colección Memorias y Biografías. Marcial Pons, 1999, p.185.

*desaparecer á impulsos de la codicia de los propios o de los manejos empleados para adquirirlas por los extraños. A nosotros nos parece excelente la idea y por ello felicitamos al Señor Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes; pero a la vez le preguntamos: ¿El Catálogo llenara esos fines sin una ley de antigüedades? Porque el acuse de la existencia de las riquezas artísticas de la Nación, que es lo que da el Catálogo, no evitará las sustracciones, a no ser que por medio de una ley de antigüedades, que es su complemento, se prohíba la exportación al extranjero y se imponga una sanción penal a los contraventores*<sup>2567</sup>. En la revista la Ilustración española y americana Balsa de la Vega escribiría un artículo titulado publicado en 1901. Las críticas se centrarían en haber obviado el papel de la Real Academia de la Historia a la hora de realizar el catálogo: *En primer término, creo que el Sr. Ministro de Instrucción Pública ha olvidado una corporación, para el caso presente tan estimable por sus luces, si ha de realizarse con verdadero éxito la labor de catalogar monumentos y obras artísticas, como es la Academia de la Historia. Sin que pueda censurarse, ni mucho menos, el que se haya pedido consejo a la de San Fernando, compuesta de peritísimas individualidades, es lo cierto que en la Academia arriba mencionada, los principales motivos de trabajo se refieren precisamente a la erudición histórico-arqueológica, al análisis de monumentos de todo género, y a la investigación y determinación de éstos. Y como en empresas de la magnitud de la presente el método significa casi el éxito, cuanto mayor sea la autoridad y competencia de los que la dirijan, mayores son las probabilidades de un acierto completo. Al mismo tiempo Balsa de la Vega pondría en cuestión el hecho de que fuera elaborada por una sola persona: (...) Y aun cuando se haya creído oportuno encomendar a una sola persona la formación del Catálogo, con el fin de que domine la necesaria unidad de criterio para evitar la variedad y confusión de juicios, la experiencia adquirida en trabajos de esta índole, y la que se adquiere en el estudio de las obras escritas acerca del particular, enseña que es imposible acatar como buenos los juicios de una sola persona siquiera sea tan perita como, según mis noticias, es la nombrada; pues si hay estudios sujetos al error, uno de ellos es sin duda alguna el de los estilos, carácter, forma, procedencias, épocas, etc..., de los monumentos arqueológicos, entendiendo por monumentos lo que la ciencia dicha determina como tales (...) Precisamente el peligro de confusión de juicios que han pretendido evitarse encomendando a una sola persona la catalogación, clasificada cronológicamente, de la riqueza monumental y artística de España, se producirá, tenga por seguro el Sr. Ministro, en el instante en que los especialistas comiencen sus trabajos para crear la historia de nuestras artes suntuarias. Que no es posible, porque no es dable a las fuerzas humanas, el dominio del conjunto de la historia del arte en todos sus aspectos, y sí únicamente en una rama, llamémosle especialidad de ella. Por otra parte, la labor se realizará más fácilmente y con mayores garantías y probabilidades de acierto, si lo llevase a cabo dos o más personas, porque es axiomático de que ven más cuatro ojos que dos.*

Dos años más tarde, estando al frente del Ministerio Alvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, se publicaría el decreto de 14 de febrero de 1902, precisando aun más la elaboración del Catálogo Monumental que empezaría a denominarse con el término de Inventario General de Monumentos

---

<sup>2567</sup> Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Año IV, Enero, 1900, N.1. pp.383-384.

Históricos-Artísticos, haciéndose para cada provincia uno por separado, semejante al ya terminado de la de Avila. Es muy interesante la propia Exposición de Motivos a la hora de establecer el objetivo primordial de su elaboración, especialmente a la hora de disponer de limitar el comercio especulativo de los bienes de interés histórico y artístico: *Dos fines principales se persiguen con la formación del Catálogo Monumental de España: uno el que se refiere a difundir por medio de la publicidad los tesoros de arte dispersos por todo el haz de la Nación, como medio de difundir el gusto artístico; el otro es impedir que estos mismos tesoros vayan paulatinamente desapareciendo de entre nosotros. Sin embargo se especificaba cómo el derecho de la propiedad privada era el verdadero obstáculo a la hora de confeccionarse un catálogo, cuyos resultados no eran satisfactorios, al igual que había ocurrido con el edicto Pacca: Las publicaciones emprendidas hace años con esplendidez notable en el fondo y en la forma, no han podido sostenerse por falta de recursos, y las medidas coercitivas que con harta frecuencia suelen proponerse y reclamarse, sobre ser vejatorias y atentar manifiestamente al sagrado derecho de la propiedad, sólo con sus anuncios provocan un efecto diametralmente contrario. Los resultados obtenidos en Italia por el edicto Pacca podrían, no obstante, estimular la adopción de idénticas o parecidas medidas; más, sin embargo, las mismas dificultades que en aquel país encuentra esta disposición, y la diferencia de costumbres la hace de todo punto inaplicable en España. El modo único, eficaz y sencillo de que los monumentos del Arte y de la Antigüedad se salven de la destrucción originada por la incuria, o sean defendidos de una codicia extraviada por la ignorancia, es procurar que su existencia, su valor y su verdadero mérito sean conocidos por todos y muy principalmente por sus propios poseedores; pues la mayor parte de las veces, si van al extranjero algunos objetos preciosos, es porque sus dueños los ceden por precio relativamente ínfimo. En otras ocasiones, el estado de ocultación sistemático de esos mismos objetos favorece la infidencia de sus guardadores; males todos que se evitan o se aminoran con solo saber lo que existe en cada sitio o lo que aproximadamente vale. Por el contrario se emulaba la gestión de las instituciones privadas de protectores del Patrimonio Monumental: Muchos han ayudado a poner de manifiesto nuestra riqueza artística las Sociedades Arqueológicas, las de Excursiones y, en la medida en que les ha sido posible, las Comisiones Provinciales de Monumentos, dependientes de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, y no cabe desconocer que los esfuerzos de todas estas entidades han allanado el camino el camino para una obra de conjunto que, limitaciones modestas, llene sin embargo las necesidades apuntadas.*

La confección del Catálogo se realizaría con un espíritu más sistematizador que hasta el momento se había realizado: *Conviene, sin embargo, proceder con gran medida, no sólo porque los recursos materiales no son por ahora abundantes, sino porque toda precipitación sería dañosa en asunto por sí tan delicado. No faltan entre nosotros Arqueólogos de mérito capaces de desempeñar este y otros más difíciles cometidos; pero es preciso atender con toda eficacia a la uniformidad del método y el espíritu que debe informar la obra, y por eso es indispensable disponer las tareas de los diversos Comisionados de manera que tengan*

*éstos entre sí la comunicación necesaria y la dirección superior conveniente, sin perjuicio del criterio individual de cada uno en materia artística.* Con este objetivo se diseñaría un procedimiento administrativo específico donde se intentaba resolver todo los problemas de organización y personal que la confección del catálogo podía generar. De esta manera se dispondría que se haría un Inventario separado por cada provincia, semejante al ya terminado de la de Avila (art.2), dividiéndose el territorio en tres secciones, una que comprenda las provincias de los antiguos Reinos de Castilla y León; otra, los de Andalucía y Extremadura, y otra, los correspondientes a las Coronas de Aragón y Navarra (art.3), siendo el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes el encargado de la dirección de estos trabajos, asesorado por la Comisión Mixta organizadora de la provinciales de Monumentos, compuesta de individuos de número de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando (art.4). Cada una de las tres Secciones estaría a cargo de la persona o personas que nombrase el Ministro, a propuesta de la Comisión, y ésta misma podrá también indicar la conveniencia de relevar de su encargo a algún comisionado cuando justas causas le mueven a ello (art.5). La Comisión propondría cuáles debían de ser las provincias en que sucesivamente se vaya formando el Inventario, dando a los Comisionados las instrucciones necesarias para el mejor desempeño de su cometido, remitiendo con su informe al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes los trabajos cuando estuviesen terminados (art.7). El Ministro, a propuesta de la Comisión, dispondría, cuando lo juzgue oportuno, que dos Comisionados trabajen juntos en una provincia por tiempo determinado, en cuyo caso, el más moderno estaría a las órdenes del otro (art.8). Los Inventarios comprenderán, además de la descripción y estudio crítico, una breve noticia histórica de los monumentos, para lo cual los Comisionados deberán examinar cuidadosamente los documentos impresos o manuscritos, en particular los que se conservaban en los Archivos nacionales, municipales, eclesiásticos y particulares. La descripción de los monumentos se presentaría ilustrada con planos, dibujos y fotografías de los que por su novedad e importancia requirieran (art.9). Al terminar el Catálogo se publicaría un resumen detallado de él en la gaceta de Madrid y en los Boletines oficiales de la provincia (art.10). Al acabar el Inventario, estaba prevista que se publicaran un resumen detallado en la *Gaceta de Madrid* y en los *Boletines Oficiales* de las provincias, haciéndose dos ediciones, uno de tipo económico, y otra de lujo, para investigadores y eruditos, cuyo importe no podía rebasar las diez mil pesetas (art.14)<sup>2568</sup>.

---

<sup>2568</sup> HERNANDEZ NUÑEZ, Juan Carlos “Reflexiones sobre el Catálogo Monumental de España” *PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 15, junio, 1996, p.163.

### **4.3. El proyecto de Ley de 11 de diciembre de 1900 de Antonio García Alix: Un primer ensayo de tutela pública sobre la regulación del comercio de bienes de interés histórico y artístico, tanto público como privado.**

En virtud de la Real orden del 7 de diciembre de 1900 sería autorizando la presentación a deliberación en las Cortes de un proyecto de ley de defensa y conservación de antigüedades, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Antonio García Alix. El 11 de diciembre de 1900 sería presentando al Senado, y aunque no llegó a entrar en vigor podemos afirmar que por su novedad se convirtió en un importante acontecimiento en el ámbito de la tutela pública del Patrimonio Monumental. El Proyecto de Ley estaría formado por una Exposición de Motivos, 4 capítulos, entre los que se encontraría 14 artículos y un artículo adicional. En la Exposición de Motivos, García Alix mostraba la escasa conciencia patrimonial que adolecía el país, a pesar de los esfuerzos que habían realizado las instituciones políticas, lo que había significado una amplia pérdida de bienes históricos y artísticos: *Es general la creencia de que España se ha cuidado poco de conservar el tesoro de sus antigüedades y de que los Poderes Públicos apenas han dictado disposiciones encaminada a fin tan importante y civilizador. Lo primero es, por desgracia, verdad; la escasísima influencia que las gentes doctas han ejercido sobre la masa general; la dificultad de organizar Comisiones encargadas de investigar, recoger o inspeccionar el gran número de monumentos arqueológicos y de objetos artísticos que se hallaban diseminado por toda España, como testigos mudos de pasadas civilizaciones; la ineficacia, en fin, de los medios que el Poder central tenía a su alcance para impedir la profanación de aquellas sagradas reliquias, han sido causa de que la mano destructora de la ignorancia unas veces, y los afanes de la codicia otras, hayan hecho desaparecer una gran parte del riquísimo tesoro de nuestras antigüedades, que, o fueron totalmente destruidas para la ciencia, o pasaron, con detrimento de la honra nacional, a enriquecer los Museos y los Archivos de otras Naciones más atentas que nosotros a los estudios históricos. Pero si, rindiendo un tributo a la verdad, debemos reconocer y declarar, aunque pese a nuestro patriotismo, los estragos que la ignorancia ha causado en nuestros monumentos y objetos arqueológicos, no se puede decir con justicia que no se hayan cuidado los Poderes Públicos de dictar aquellas prudentes y severas disposiciones que el carácter y las necesidades de los tiempos han hecho precisas, ora para salvar de la construcción aquellos sagrados objetos, ora para coleccionarlos y ofrecerlos al estudio de los doctos.*

Sin embargo apuntaba como España había sido el país donde más producción normativa se había dictado en torno a la tutela del Patrimonio Monumental: *Y en este punto, con ser España una de las Naciones que menos antigüedades ha conservado, en relación con su gran riqueza arqueológica, es sin embargo, uno de los pueblos de Europa en que más sabias disposiciones se han dictado sobre la materia, resaltando los progresos que se habían dado en el estudio de las antigüedades, que había despertado el afán del coleccionismo, especialmente extranjero, dejando de manifiesto la necesidad de regular dicho comercio con una ley que solventara los problemas generados en el ámbito del*



comercio de estos bienes: *Por fortuna, la cultura patria ha progresado mucho en estos últimos tiempos; el estudio de las antigüedades ha adquirido grande importancia; tenemos un Cuerpo facultativo encargado de custodiarlas y de darlas a conocer; el comercio de objetos antiguos, desarrollado de pocos años a esta parte, ha despertado el afán de las investigaciones artísticas y aquilatado el valor de aquellos objetos; y este conjunto de circunstancias favorables para la ciencia arqueológica, justifican la creencia de que no han de ser infecundas las disposiciones que se adopten al presente en materia de antigüedades.* Entre las medidas que debían de adoptarse estaría la necesidad imperiosa de inventariar la riqueza artística y arqueológica de España, tanto de aquellos que pertenecieran al Estado, como a los particulares o corporaciones, para lo que había que establecer un Registro donde constase la propiedad, su mérito, su valor histórico y sus traslaciones de dominio, defendiendo la idea de que el Estado, respetando la propiedad de los objetos arqueológicos, legítimamente adquiridos por hallazgo, por compra, por permuta, por donación o por herencia, no reconocería la de aquellos que no aparecieran inscritos en el Registro, dejando a salvo el derecho del propietario, por lo que esta ley lo que proponía no era *un ataque al derecho de propiedad, sino que por el contrario se busca por este medio garantizar y amparar la de los objetos artísticos.* La disposición de los bienes por parte de su legítimo dueño tendría como límite la destrucción del propio monumento histórico ni un objeto de arte, aunque fuera de su propiedad, *porque eso es un atentado de lesa civilización.* Al mismo tiempo, García Alix defendería la necesidad de prohibir la exportación de antigüedades, que había tenido sus precedentes en la Real cédula de 28 de abril de 1837 y circular del 27 de mayo del mismo año, para lo que había que establecer en favor del Estado el derecho de retracto con relación a la compraventa de objetos arqueológicos, y autorizar la expropiación de éstos cuando previamente se declaren de utilidad en el orden de la cultura general.

#### **4.3.1. La conceptualización de las Antigüedades.**

Sin duda alguna en el Proyecto de Ley de García Alix se amplía la tipicidad de los bienes que podían ser considerados como pertenecientes al Patrimonio Monumental, reflejo de los avances que se habían producido en los ámbitos científicos de la historiografía, por lo que se entendían como tales, para los efectos de esta ley, los monumentos arquitectónicos, esculturas, pinturas, inscripciones, libros, códices, manuscritos, monedas, medallas, trajes, armas, instrumentos y cuantos objetos arqueológicos puedan servir de algún modo para ilustrar la historia o perpetuar el recuerdo de acontecimientos gloriosos (art.1º). Elaboraría una clasificación sistematizada por razón de la naturaleza y por el tiempo (art.3º). En virtud de su naturaleza, pondría en una misma posición los bienes muebles e inmuebles, distinguiéndose entre Documentos y libros, Pinturas y Esculturas, Monumentos Arquitectónicos, Objetos arqueológicos (art.3). El límite cronológico volvería a ser determinante en la inclusión del carácter del bien a tutelar, al considerar comprendidos todos los objetos de la edad moderna, hasta el fin del siglo pasado (art.1º), más aún

cuando establece una clasificación en función del tiempo histórico al que pertenecen, distinguiéndose entre Prehistóricos y de las civilizaciones primitivas-Del periodo prerromano-Del periodo romano-. Del periodo visigodo. -Del periodo árabe.- Del periodo cristiano.- Del periodo del Renacimiento (art.3º). Como fundamento del objeto de tutela pública se subrayaría su rareza, su importancia para el estudio de la historia patria, o por simbolizar glorias nacionales (art.1º). El carácter formalista del bien a tutelar sigue la tradición legislativa de las declaraciones de Monumento Nacional, al tener como requisito formal que fuera declarado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, previo informe favorable, o a propuesta de la Real Academia de la Historia, de la de Bellas Artes de San Fernando, y de la junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. La inclusión de esta última institución se convertía en una verdadera novedad en el ámbito de la tutela pública del Patrimonio Monumental (art.2).

#### **4.3.2. El deber de conservación y divulgación del Patrimonio Monumental.**

El Estado tendría la obligación de custodiar y conservar los monumentos declarados nacionales (art.4º), custodiándose los documentos, manuscritos, códices, libros antiguos, pinturas y esculturas y objetos arqueológicos, en los Archivos, Bibliotecas y Museos públicos, no pudiendo ser objetos de cesión, ni aún en calidad de depósito, a Corporaciones ni particulares (art.4). La divulgación del Patrimonio Monumental, que había ido fraguándose en las etapas anteriores, en disposiciones legales dispersas, quedaba incluida al disponerse que los Municipios y Diputaciones provinciales tendrían la obligación de exponer al público las colecciones artísticas o arqueológicas que poseyeran, o depositarlas al efecto en los Museos del Estado (art.5), al igual que tendrían que estar abiertos a la libre investigación, sus archivos siempre que tuviese un interés histórico (art.5), una pretensión que se venía defendiendo durante toda la etapa liberal. De la misma manera se regiría las mismas obligaciones para las Reales Academias, Sociedades Económicas y Cabildos Catedrales, así como también para los archivos de protocolos y parroquiales en los documentos anteriores a este siglo (art.6), al ser consideradas unas instituciones que cumplían una función pública. Como complemento a la política tutelar del Patrimonio Monumental se dispondría que Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, por propia iniciativa, o a propuesta de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, de la Real Academia de la Historia o de la de Bellas Artes de San Fernando, estableciera Museos Arqueológicos en aquellas provincias que no hubiera, con la condición de que en dicha localidad existiesen colecciones arqueológicas de bastante importancia para servir de base al nuevo Museo (art.7).

#### **4.3.3. El Registro de la propiedad artístico-arqueológico.**

En el capítulo II se iría a regular la creación de una nueva institución, el Registro de la propiedad artístico-arqueológica, reflejo de la legislación francesa. Se articularía el Registro en dos sesiones: uno para inscribir los objetos pertenecientes al Estado y otro para la inscripción de los pertenecientes a Corporaciones y particulares (art.8). La inscripción sería obligatoria y gratuita, así como la expedición de las certificaciones que se soliciten, por lo que *no se reputará poseedor con justo título al que no inscriba sus antigüedades*, instándose una verdadera declaración de dominio sobre el bien, por lo que su adquisición no produciría *efectos legales dentro del plazo improrrogable de treinta días*, fuese solicitada la inscripción de la tramitación, *siendo de necesidad que previamente esté inscrito el objeto adquirido* (art.8.3). El Registro estaría a cargo en todas las provincias del Jefe del Archivo Histórico en lo referente a la riqueza diplomática; del Jefe de la Biblioteca para los códices y libros incunables y raros, y Jefe del Museo Arqueológico para los objetos artísticos-arqueológicos (art.9.1), y en el caso de las provincias donde no hubiera Archivo histórico, estaría a cargo del Jefe de la Biblioteca el registro de la riqueza diplomática, y en aquellas en que no existiera un Museo arqueológico, serían las Comisiones provinciales de monumentos las encargadas de llevar el registro de los objetos artísticos-arqueológicos (art.9.2). Los registros provinciales tendrían que enviar mensualmente al Registro de la propiedad intelectual las relaciones completas de las inscripciones, transmisiones y demás alteraciones de la propiedad de las antigüedades, a fin de que, reuniendo todos los datos, forme el índice general, que se publicará cada diez años (art.9.3).

#### **4.3.4. Los límites de la exportación de las obras de arte y antigüedades.**

Sin duda alguna es el capítulo III donde encontramos la novedad más importante en el ámbito legislativo del Patrimonio Monumental, al incluirse los límites de disposición por parte de los particulares y las Corporaciones Privadas a la hora de vender o permutar sus antigüedades, ya que solamente se le autorizaría hacerlo en el interior del país (art.10), por lo que limitaba la libre exportación de las obras de arte, que aunque no era una novedad legislativa en España, sí representaba en cierta manera una puesta al día de las disposiciones normativas que en otros ordenamientos europeos se estaban imponiendo, por lo que se iría limitando la libertad absoluta del propietario de la obra de arte sobre su disposición y uso, y al mismo tiempo que se iba configurando una verdadera conciencia pública del Patrimonio Monumental. Se contemplaba asimismo el derecho de retracto por parte del Estado, pudiéndolo ejercer dentro de los treinta días siguientes a la inscripción de la transmisión, y en todo tiempo si aquella no se hubiere verificado (art.10). La salida de estos bienes arqueológicos no lo podrían hacer los propietarios sin la autorización especial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, previo el informe facultativo favorable de la Real Academia de la Historia, de la de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos (art.11). En caso de que fuera infringido por parte de la Corporación particular

dicha medida sería castigado al pago del quíntuplo del valor del objeto u objetos exportados (art.11). Se autorizaba a su vez al Gobierno la expropiación de antigüedades pertenecientes a Corporaciones y particulares, previa la tasación correspondiente y la declaración de utilidad pública en orden a la cultura, a propuesta de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes y la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos (art.12). Serían exceptuadas todas estas disposiciones en los casos en que fueran reproducciones artísticas, las cuales serán objetos de libre comercio (art.13).

#### **4.3.5. Los límites de la restauración del inmueble de interés histórico y artístico del propietario particular.**

En el Capítulo IV se contendría *Los límites de la restauración del inmueble de interés histórico y artístico del propietario particular*, que al igual que en el caso de las exportaciones se convierte en un límite tutelar de la esfera privada del propietario del bien de interés histórico y artístico. Para tutelar los trabajos de restauración de los monumentos arquitectónicos se nombraría una Comisión formada por el Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que ostentaría el cargo de Presidente; el Jefe Superior del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios como Vicepresidente; dos académicos de número de las Reales de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, el Jefe del Museo Arqueológico Nacional, el del Museo de Reproducciones Artísticas, un Vocal de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, y dos arquitectos de reconocido mérito (art.14). Dicha Comisión fijará el alcance de la restauración e informará y propondrá al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes lo que considere más conveniente para la conservación de los monumentos (art.14.2).

En un artículo adicional se contemplaba la promulgación en el plazo de tres meses por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a partir del día en que se hubiese publicado la ley, un reglamento para la ejecución y observancia de la misma. Sin embargo, el proyecto de ley no siguió su trámite al quedar disuelto las Cámaras, por lo que se no hubo tiempo de que se le asignara el correspondiente Dictamen. A pesar que no fuera aprobada, no cabe duda que el proyecto de García Alix comenzó a abrir un nuevo escenario en la tutela pública del Patrimonio Monumental.

#### **4.4. La génesis de los servicios públicos de índole cultural; El régimen jurídico de los Archivos Públicos y Museos Públicos.**

##### **4.4.1. La tutela pública del Patrimonio Documental: La consagración de los Archivos como Servicios Públicos.**

Con la promulgación del Real Decreto de 18 de noviembre de 1887, sería aprobado el Reglamento del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y de los establecimientos que del mismo

dependen, definiría el objetivo de la administración central, el control del patrimonio documental de todos los territorios y de todas las administraciones, concediéndole un valor potencial de los fondos para la elaboración de la propia historiografía nacional de la Restauración. Otro de los problemas de la centralización del archivo nacional será el correspondiente a los archivos eclesiásticos. Hasta 1871, el Archivo Nacional seguiría siendo un depósito de documentos de monasterios y conventos suprimidos, cuyo inventario citaba 109.367 monumentos. En 1896 se comienza la recepción de archivos monásticos no incorporados, concentración que se culminaría con la **Real Orden de 26 de agosto de 1898**, por la que el Ministerio de Fomento solicitaría al de Hacienda el traslado al Archivo Histórico Nacional de toda la documentación de conventos aún conservada en las Delegaciones Provinciales de Hacienda. La injerencia del Estado en el ámbito de los archivos parroquiales, arzobispales o catedralicios serían duramente opuestas por algunos cabildos catedralicios, que incluso dirigen al Ministerio del Fomento para que se les reintegraran los libros y documentos que habían sido despojados a raíz de la desamortización, como fueron los casos de los de Ávila o de Alcalá de Henares. Sin embargo, a partir de la etapa de la Restauración, el Archivo Histórico Nacional comenzaría a incorporar documentación de otro carácter que le sirviera para engrandecer la historia nacional, por lo que intentará controlar todos los archivos dependientes de la administración central, como se puede comprobar en los referente a los todos los Archivos de Hacienda, tras la publicación de **la Real Decreto de 31 de julio de 1888**, el Archivo de India, con la **Real Orden de 7 de agosto de 1894** y todas las bibliotecas archivos universitarios con **la Real Orden de 7 de agosto de 1895**<sup>2569</sup>.

Uno de los pilares primordiales en la tutela del Patrimonio Documental fue la regulación del acceso del contenido de los documentos conservados en los Archivos Públicos. El interés nacional con resabios patrióticos siguió primando sobre el interés histórico que quedaba encerrado en los contenidos de los documentos. Uno de las primeras disposiciones legislativas en la que se limitaba el acceso a los documentos públicos sería **el Real Decreto de 18 de mayo de 1890**, por el que se determina cuáles serán permanentemente o circunstancialmente los documentos que no podrán ser examinados por razones de interés patrio. En el Preámbulo se señalaba que *en todos los tiempos, y actualmente en todas las naciones, se anteponen los intereses de la patria a los intereses de la Historia; y sin negar nada que importe a ésta, es de rigor que conciliando ambos intereses se reserve la facultad de autorizar en cada caso el examen de aquellos documentos que por modo principal e íntimo se relacionan con graves cuestiones de gobierno*. Con la promulgación del **Real decreto de 18 de mayo de 1900** sería reformado el servicio de los Archivos, por lo que como expresaba su Exposición de Motivos dejaba de ser un mero depósito de legados del pasado a un verdadero instrumento de investigación

---

<sup>2569</sup> CERDA DÍAZ, Julio, 1997, pp.112-114.



para los historiadores, por lo que debía de ser tutelado por el Estado: *Los Archivos no son únicamente depósitos donde se guarde con cuidado la documentación de pasados siglos; son establecimientos científicos, en los cuales un personal facultativo y docto clasifica, ordena, cataloga y estudia papeles escritos en todas las épocas y en todos los idiomas, y facilita a los investigadores y a los eruditos los elementos que han menester para su labor.* Al mismo tiempo que se consideraba que para la construcción de la ciencia histórica era vital el acceso a los documentos que habían quedado depositados en los archivos, se señalaba el peligro que suponía llevar a la luz alguna información que podía poner en peligro los intereses nacionales, que debían prevalecer sobre los valores históricos: (...) *sucedió la práctica abusiva de tener totalmente abiertos los Archivos a toda clase de investigaciones, aun a aquellas de carácter político internacional, sin considerar que algunas pueden perjudicar gravemente los intereses de la patria (...) Ciertamente que en nación alguna se conceden estas facilidades, y es que el patriotismo, como sentimiento y como idea, se ha sentido y se siente en oposición al cosmopolitismo, por necesidades de justa y natural defensa, y no se puede exigir, en nombre de los intereses de la historia, que una entidad política, por encima de cualesquiera consideración que arañan a su independencia o a su vida, tenga la abnegación suicida de traducir el ideal del derecho en resultados concretos que perjudiquen y alteren las condiciones precisas para cumplir los deberes de su vida nacional. Por esto, en todos los tiempos, y actualmente en todas las naciones, se anteponen los intereses de la Patria a los intereses de la historia; y sin negar nada que importe a esta, es de rigor que el Ministro que suscribe, conciliando ambos intereses, se reserve la facultad de autorizar en cada caso el examen de aquellos documentos que por modo principal e íntimos se relacionan con cuestiones de gobierno, que, naturalmente, no pueden conocer y apreciar en todo momento los Jefes de Archivo.* De esta manera se establecería que sería necesario la autorización especial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, una vez oída la Junta facultativa del ramo, en tres casos fundamentales: el estudio o copia de los documentos relativos a límites y fronteras de las Naciones, los papeles inéditos de negociaciones diplomáticas, informes y las correspondencias reservados de Embajadores y Representantes, desde el advenimiento de la Casa de Borbón, y los documentos y planos que no hayan sido publicados referentes a fortificaciones y defensas nacionales (art.1). A los Jefes de los Archivos se otorgaría la potestad de autorizar el acceso de aquellos documentos que quedaran exceptuados en el artículo anterior, para lo que se aplicaría con el más amplio sentido el art.53 del reglamento orgánico del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (art.2). En el caso de que los Jefes de los establecimientos considerasen que por interés nacional fuese necesario reservar cualquier otro documento reclamado por el público y no comprendido en los tres grupos fijados en el art.1º, no podrían autorizarlo por lo que debería de consultar con la mayor urgencia la resolución del caso al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.2).

#### **4.4.2. La configuración definitiva del Museo Público en la España de la Regencia de María Cristina.**

Como apunta María Bolaños, *las décadas que bordean el tránsito entre los dos siglos, va a significarse por una formidable expansión del hecho museístico, rompiendo el marco estrecho que había caracterizado los años centrales de las centurias —el arte o antigüedades— y acogiendo bajo el concepto de lo museable a nuevos, casi infinitos, objetos (...) En España, que sigue el pulso europeo, se inicia una nueva época en la que nada escapa a la voracidad de la máquina museal, y los objetos variopintos son atrapados para su exhibición, en este nuevo principio del enciclopedismo de la exhaustividad, que no deja sin cubrir ninguna laguna de las actividades humanas (...)*<sup>2570</sup>. De esta manera el concepto museístico cambia, y con él el propio concepto del legado patrimonial, al incluir bienes que escapaban a lo puramente histórico o artístico. El Estado se convertirá en un verdadero impulsador de la nueva concepción museística y al mismo tiempo se convierte en un verdadero instrumento de delimitación de la política cultural de la nación. Al mismo tiempo se va a encontrar en el seno de su propiedad un gran número de bienes que debe de proteger y conservar, en un fenómeno coleccionista que desde la etapa de la desamortización no se había vivido. En la Exposición de Motivos del Real decreto de 21 de febrero de 1901 sobre Exposición Nacional de retratos de personas fallecidos deja prestancia de la impronta del modelo museístico de carácter público, que lo equipara con la impronta de las Exposiciones Públicas instadas por el propio Gobierno: *Sirvan las exposiciones industriales y artísticas, que con tanto provecho celebran los pueblos modernos, para manifestar en luminosa síntesis el estado de cultura presente y alentar a las generaciones que viven a proseguir por derroteros comenzados con fortuna y a buscar nuevas fuentes de bienestar y riqueza. Más los progresos de las ciencias de orden puramente intelectual han conseguido por los afanes de la investigación y de la crítica, exigen que para el total resultado de ambas se procuren a su consideración y estudio todos los medios adecuados, y con singular motivo los que por su naturaleza requieren la superior acción del Poder Público, por lo común más eficaz que la de los individuos y de aun de Corporaciones eminentes. De esto ha nacido el establecimiento de Museos Históricos y arqueológicos (...)*<sup>2571</sup>.

De esta manera se va a ir desarrollando una amplia política legislativa que dará una verdadera red nacional de museos, que podemos desglosar en tres bloques:

- 1º) La inclusión de obras de arte contemporáneos de artistas españoles con la fundación del Museo Contemporáneo de Madrid.
- 2º) Las antiguas colecciones que habían pertenecido a la Corona y a la Iglesia, que se encontraban depositadas en el Museo del Prado.
- 3º) Las colecciones de bienes no considerados de interés histórico y artístico.

#### **4.4.2.1. Un precedente de regulación del museo público: la Real orden de 7 de febrero de 1890 por el que el Estado dispone la adquisición de obras de arte para los museos públicos y el Real decreto de 4 de agosto de 1895**

---

<sup>2570</sup> BOLAÑOS, María, 2008, pp.268-269.

<sup>2571</sup> Colección legislativa de España, Tomo p.244; Gaceta de Madrid 24 de febrero de 1902.

**por el que se dispone la adquisición de obras de arte contemporáneo por el Estado, dando origen al Museo del Arte contemporáneo en Madrid.**

El 31 de marzo de 1876 sería promulgado el Real decreto aprobando el Reglamento para el Museo Nacional de Pintura y Escultura. En el artículo 1º se dispondría que el Museo Nacional de Pintura y Escultura dependiera del Ministerio de Fomento, al que se uniría el Museo de la Trinidad. El objetivo del Museo Nacional sería el conservar las obras selectas de Pintura y Escultura que fueran propiedad del Estado (art.2º), al mismo tiempo que el nombramiento de Director del Museo debería recaer siempre en un individuo de la Sección de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (art.4º). Una de las causas de la adquisición de obras de arte de los Museos Públicos fue la donación, que se convierte en una práctica habitual desde finales del siglo XIX. En el caso del Museo del Prado, podríamos citar la donación del banquero alemán Emile D'Erlanger, que en 1881 dejaría en legado las Pinturas Negras de Goya, compuesto por catorce pinturas murales pasadas a lienzo, realizadas entre 1819 y 1823, para decorar la Quinta del Sordo. Una de las donaciones más importantes del siglo XIX fue la D<sup>a</sup> María Dionisia de Vives y Zires, condesa de Cuba y duquesa viuda de Pastrana en 1889, compuesta por cerca de doscientos cuadros, formados en su mayoría por obras de Rubens. Posteriormente, en 1894, la duquesa viuda de Cabriñana donaría un gran número de obras, a las que se le añadirían a principio del siglo XX, el legado de Ramón Errazu y Rubio de Tejada (1904), con obras de Mariano Fortuny o el de Pablo Bosch y Barrau (1915)<sup>2572</sup>, convirtiéndose en uno de los primeros patronos del museo<sup>2573</sup>.

Durante esta etapa se siguieron promulgando disposiciones por el que el Estado seguiría adquiriendo obras artistas como fue el caso de **la Real orden de 7 de febrero de 1890**, siguiendo el dictamen previo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el de los Centros facultativos correspondientes, en el caso de adquisición de cuadros y objetos de arte según la clase y género a que pertenecieran (art.3º). De esta manera el Estado fue adquiriendo tanto bienes muebles como inmuebles en virtud de su interés histórico y artístico. Así por Real orden de 1º de junio de 1886 el Estado autorizaría la compra de la Cueva de Menga (Málaga), a instancia de Manuel Ramón Zarco, una vez vistos los informes que habían sido emitidos por las Reales Academias de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando y el Inspector Jefes del Museo Arqueológico Nacional valorado por su dueño dicho monumento en la cantidad de veinticinco mil pesetas, precio que estima aceptable la Comisión nombrada al efecto por orden de 20 de julio último, entre los que se encontraban los historiadores Rada y Delgado y Eduardo Saavedra. El 1 de junio se notificaría mediante oficio al Ayuntamiento de Antequera los informes satisfactorios de

<sup>2572</sup> TORMO, E. "La perla de la colección Bosh", *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, XXIV, 1916, pp.74-92.

<sup>2573</sup> LUZON MOGUE, José María, 1995, pp.28-29.

las Reales Academias, así como del Inspector Jefe del Museo Arqueológico, aprobando la compra del Dolmen. El 10 de septiembre de 1886, el Director General de Instrucción Pública trasladó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la Real Orden disponiendo la adquisición por el Estado del Dolmen. El 19 de octubre de 1887 en Acuerdo Capítular del Ayuntamiento se solicitaría al Ministerio de Fomento una subvención para la conservación del Dolmen<sup>2574</sup>. A raíz del **Real Decreto del 10 de marzo de 1900**, el Estado adquiere la Biblioteca que fue de D. Pascual de Gayangos con destino a la Biblioteca Nacional, un verdadero referente del mundo cultural español del momento. En su único artículo, se dispondría que los poseedores de dicha biblioteca, debían de entregarlos *antes del percibo de la primera anualidad, con arreglo al Catálogo formado por la Comisión formada al efecto y depositado en la Real Academia de la Historia*.

Uno de los hitos trascendentales de la historia museográfica de nuestro país fue la fundación del Museo del Arte contemporáneo en Madrid, al incorporar definitivamente las obras de artistas vivos en el seno del legado patrimonial que el Estado Liberal pretendía conservar en su seno<sup>2575</sup>. Surgía un nuevo modelo de museo en el que se exhibía las obras de autores que en este momento se estaba consagrando en el seno de la crítica y la opinión pública que estaba despertando en el ámbito social. De esta manera el Estado convertiría a un gran número de obras artísticas de artistas contemporáneos en bienes nacionales, de dominio público, igualándolo en su régimen patrimonial a los que habían pertenecido a la Corona y a la Iglesia y depositado en los tradicionales museos, al mismo tiempo que quedaban fuera del amplio mercado artístico que estaban surgiendo a finales del siglo XIX. De esta manera siendo ministro de Fomento, Alejandro Groizart, se promulgaría el **Real decreto de 4 de agosto de 1895** creándose un Museo de Arte Contemporáneo. En la Exposición de Motivos se insertaba la importancia pública de la fundación de dicha institución: *La creación del Museo de Arte Contemporáneo es una necesidad sentida por la opinión y reclamada por la crítica. La numerosa colección de obras artísticas de autores contemporáneos, que mal acondicionadas y no bien clasificadas, se han reunidos en algunas de las salas del Museo Nacional, no pueden llenar aquel objeto (...). La creación del Museo contemporáneo que ha de ejercer seguramente una doble y beneficiosa acción sobre nuestros artistas y nuestro público, despertando el afán de la comparación, y de ella, haciendo brotar el juicio propio reflexivo*. De esta manera el Estado insertaría como bienes nacionales la amplia colección de bienes artísticos de artistas contemporáneos que poseía desde los inicios de las exposiciones nacionales. En el artículo primero se desglosaría la procedencia de los bienes artísticos que formaría la colección artística del nuevo Museo: 1º Las obras de pintura y

---

<sup>2574</sup> Dólmenes de Antequera, Proceso de institucionalización de la tutela, 1530-1990. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

<sup>2575</sup> MARTINEZ NOVILLO, A. *Historia del Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid*, Madrid, Ministerio de Cultura, 2 Vol. Madrid, 1983.

escultura que hayan obtenido en Exposiciones nacionales premio de honor o primeras medallas, y formen hoy parte de las colecciones del Estado; 2º Las obras de pintura y escultura que obtuvieron en Exposiciones nacionales premios de honor o primeras medallas, y que con aquel objeto adquiere el Gobierno; 3º Las obras de artistas de reconocido mérito que hubieren fallecido y que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando considere digno de ese honor; 4º Las obras que adquiriera el Estado de artistas contemporáneos que hayan sido ya premiados con primeras medallas, y que a juicio de la indicada Academia deban merecer esa distinción y 5º Los envíos de cuarto año de los pensionados de número y de tercer año de los de mérito de la Real Academia de San Fernando haya juzgado concediéndole la primera calificación, o que al hacerlo en lo sucesivo entiendan que merecen figurar en el Museo de Arte Contemporáneo.

Un decreto posterior, **de 25 de octubre de 1895** reorganizaría el Museo de Arte contemporáneo con la denominación de Museo de Arte Moderno, para ello se nombraría una Comisión que estaría presidido por Pedro de Madrazo y formada por el director del Prado y dos críticos reconocidos, J. Octavio Picón y F. Balart, sería los que decidirían el límite cronológico y los periodos estilísticos en que se separaría el llamado arte antiguo del contemporáneo, por lo que se admitiría la muerte de Goya como la frontera entre ambos, como así aparece reflejado en la propia Exposición de Motivos: *Si bien los conceptos de moderno y contemporáneo son relativos, entiende el Ministro que suscribe que para evitar el error en que podría incurrirse de asimilar el nuevo Museo a los artistas contemporáneo (...) conviene cambiar la denominación de que se trata por la de Museo de arte moderno, más comprensiva y propia de un establecimiento en que las obras artísticas reciben colocación definitiva (...) No se señaló en el Real decreto de agosto del 94 el momento de nuestra historia artística, que hubiera de considerarse como inicial del arte contemporáneo; pero la Comisión encargada en aquella fecha de organizar el Museo, después de maduras deliberaciones, acordó fijar el límite entre el antiguo y moderno arte español en la época en que las teorías estéticas puestas en práctica por David y Canovas e introducidas en España a principio del presente siglo, cambiaron la corriente del arte nacional. A juicio de la Comisión, Goya fue el último representante de la antigua pintura española, como lo fueron Adam o Vergara de la antigua escultura, y en él termina el ciclo del arte que se puede admirar en el Museo del Prado. En Goya, concluye la serie de los grandes intérpretes de la estética española antigua; y el nuevo Museo debe reservarse al arte de tendencias más generales y de carácter universal y unitario, que desde principios de siglo se impone progresivamente en las naciones cultas. En el articulado aparecería el carácter de dominio público de estos bienes: *Se reunirán en él y conservarán las obras más importantes de pinturas y esculturas que sean propiedad del Estado, ejecutadas por artistas españoles* (art.2) así como su procedencia: desde los que más hayan brillado desde la extinción de las antiguas escuelas regionales, cuyo último y excepcional florecimiento personifica D. Francisco de Goya (art.2); Las obras de pinturas y esculturas adquiridas por el Estado, posteriores a la*



mencionada época, que hayan sido premiadas en Exposiciones Nacionales o que deban de ingresar en el nuevo local, a juicio de los Directores de ambos Museos (art.3) y los envíos de cuarto año de los pensionados de número y los de tercer año de los de mérito de la Academia de Bellas Artes de Roma, siempre que sean dignos de figurar en él, a juicio de la Real Academia de San Fernando (art.4). Unos años más tarde, **el 8 de enero de 1897** sería publicado el Reglamento adjunto del Museo de Arte Moderno en la que nuevamente aparecería el carácter de dominio público de estos bienes: El Museo de Arte Moderno es propiedad del Estado, depende del Ministerio de Fomento, precisando los bienes que lo forman, que serían 1º Las Obras de pintura y escultura ejecutadas por artistas de los que más hayan brillado desde principios del siglo XIX; 2º Las obras de autores, así españoles como extranjeros, premiados en públicas Exposiciones y adquiridas por el Estado y 3º Los cuadros que envíen de la Academia de Bellas Artes de Roma los pensionados de número en el cuarto año de sus estudios, y los de mérito en el tercero, siempre que sean dignos de figurar en él a juicio de la Sección respectiva de la Real Academia de San Fernando.

Una nueva regulación del régimen administrativo del Museo Nacional de Pinturas y Esculturas vendría dado con el **Real decreto de 22 de febrero de 1901** al adolecer de deficiencias que eran preciso que desaparecieran para que, según aparecía establecía la Exposición de Motivos, *tan importante establecimiento artístico se halle, cuando menos, en igualdad de condiciones que los de otros países, ya que por el mérito de las obras en él contenidas figura como uno de los primeros de Europa; y a fin de realizar aquel propósito, se comisiono por Real orden de 8 de junio de 1900 a su Director para que visitase los Museos extranjeros y estudiase la organización y régimen de los mismos, con el objeto de conocer las reformas que en ellos se han puesto en práctica con excelentes resultados.* Se le añadiría al Museo una sala de Escultura de la Edad Media por **Real orden de 24 de mayo de 1902**, autorizando a la Dirección de este Museo para que, en consonancia con lo propuesto en el proyecto de referencia, pueda realizar la permuta de objetos artísticos con los demás Museos oficiales, provinciales o municipales, Academias, Cabildos, Catedrales, Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, Centros y edificios públicos, Corporaciones, etc., *siempre que tales permutas en nada afecten la actual riqueza artística que atesora nuestro Museo en notorio perjuicio de las demás sesiones del mismo.* Se precisaba que estas permutas debían ser informadas por el Director del Museo, a la sanción del Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

#### **4.4.2.2. La prohibición de préstamo de obras artísticas pertenecientes a Museos de Bellas Artes y Arqueológicos a exposiciones extranjeras: La Real orden de 19 de agosto de 1901.**

Una de las medidas de conservación que se establecieron en el ámbito del coleccionismo público fue la prohibición por virtud de la Real Orden de 19 de agosto de 1901 que se sacasen las obras y objetos que se custodian en el

Museo de Bellas Artes y Antigüedades. En la Exposición de Motivos se precisaba que a pesar del papel trascendental podían desempeñar la exposición en otros centros extranjeros de las obras depositadas en los museos públicos por su divulgación cultural, no cabía duda que podían perjudicar su estado de conservación e incluso su propia pérdida, por lo que se adoptaría la práctica de enviar reproducciones de los mismos: *Un deseo nobilísimo, cual es el de acrecentar la merecida fama de que gozan en el extranjero las colecciones artísticas existentes en nuestros Museos, ha dado lugar a que se saquen de ellas, para figurar en Exposiciones universales o especiales, multitud de obras de inapreciable mérito, no solo por su valor intrínseco, sino también por los recuerdos que a ellas van unidos. Innumerables son los peligros de los transportes, arrastres e instalaciones nuevas y provisionales, y para evitarlos, la mayoría de los museos de Europa solo concurren a los certámenes mediante copias y reproducciones, y esta restricción, que pudiera creerse inspirada en un espíritu estrecho, responde, por el contrario, a patrióticas miras, pues no habría medio de indemnizar la pérdida o destrucción de algunas de esas joyas artísticas, que, por otra parte, son poderosos atractivos para los viajeros.* Curiosamente, en el caso de colecciones de artistas vivos, sería autorizado su préstamo, cuando se tratara de concurrir a Exposiciones Internacionales, siendo necesario el expreso consentimiento del autor de la obra, que, al darle, adquirirá formal compromiso de restaurarla por sí mismo, caso de deterioro, o de reponerla con otra de análogas condiciones si se perdiera (art.3º).

**4.4.2.3. La traslación de los cuadros de la Real Academia de San Fernando al Museo Nacional en depósito: un problema de derecho de propiedad monumental entre el Estado y las Corporaciones Públicas: la promulgación del Real decreto de 12 de septiembre de 1901.**

Una de las controversias de dominio que se produjeron en torno a las obras de arte que aparecían insertado en sus propias colecciones fue el mantenido entre la Real Academia de San Fernando y el Museo Nacional que instaría al Ministerio que fueran allí ubicadas en régimen de depósito. En la Sesión del Senado del 3 de diciembre de 1900, el Conde de Casa-Valencia solicitaría al Ministro de Instrucción Pública la traslación de las obras de arte que estaban en la Real Academia de San Fernando. En la respuesta de García de Alix, Ministro de Instrucción Pública se la cuestión de la propiedad de las obras artísticas: *Surgirá o puede surgir la cuestión de la propiedad de la Academia sobre los cuadros; eso no lo considero de gran importancia; creo que la Academia es una sociedad que forma parte del Estado, y desde el momento mismo en que el Estado resuelve que para mayor seguridad lo que constituya joya artística de su propiedad (porque no es de la Academia, que ésta es solo una parte del Estado), vaya a encontrar garantía de seguridad en los Museos destinados al efecto, la cuestión es fácil de vencer.* Finalmente se promulgaría el Real decreto de 12 de septiembre de 1901 acordando la traslación al Museo Nacional de Pintura de las obras pictóricas existentes en la Real Academia de la Historia. El fundamento jurídico de intervención pública en los cuadros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se basaría en la propia conservación de los cuadros, haciéndose un alegato en la Exposición de Motivos de la utilidad pública que

representaría el hecho de depositar algunas obras excepcionales que estaban expuestas al robo y a la propia desidia, por lo que se podía recomendar su ubicación en el propio Museo Nacional: *Dispersas muchas y valiosas producciones artísticas pro varios y apartados puntos de España, acaso en algunas localidades dan testimonio de la veneración con que tales reliquias de arte son conservadas; pero en algún caso, nada infrecuente por desdicha, se han hallado expuestas a enajenación censurable; en la mayor parte de las ocasiones a fortuita pérdida, y en todo caso por las mismas circunstancias en que se encuentran, condenadas al desconocimiento de todos aquellos a quienes su estudio importa, y que si no ignoran su existencia, desconocen cuando menos el mérito que tratándose de obras plásticas solo puede ser advertido por la contemplación de su artística belleza. Dia llegará, y el Ministro que suscribe espera que no sea remoto, en que el Catálogo artístico de la Nación será un hecho, y los magníficos trabajos que constituyen incalculable riqueza, serán general y fácilmente admirados.* A lo que se añadiría en el caso particular de las colecciones pictóricas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: *Ante todo, importa la traslación de dichas obras por las deficientes condiciones de seguridad, que al efecto son indispensables. La proximidad de aquellas galerías que guardan tan portentosos cuadros a casas destinadas a vivienda, lo cual los pone en constante riesgo, y dentro del mismo local las condiciones de éste, que al no estar dedicado exclusivamente a los fines de un Museo, perjudican indudablemente a las pinturas notables allí conservadas, exigen su pronta traslación a más seguro sitio, según se deduce además del informe formulado por el Arquitecto encargado del edificio donde hoy se halla la Academia de San Fernando, en respuesta a una comunicación que le fue dirigida al efecto por este Ministerio. Se precisaba asimismo que dicho traslado únicamente se hace con el propósito de la más segura y mejor conservación de aquellas obras, conservando la Academia sobre las mismas la inspección que por su índole le pertenece, y sin perjuicio de que cuando la Academia se halle establecida, como es de desear, en local adecuado para la instalación de la galería de cuadros a ella pertenecientes, le puedan ser restituidos éstos, según es de justicia.*

#### **4.4.2.4. La divulgación pública del Museo Nacional: El real decreto de 7 de septiembre de 1901.**

Una de las políticas tutelares del Gobierno Liberal a principio de siglo sería la divulgación públicas de los bienes conservados en los museos públicos, especialmente en el Museo Nacional, al convertirse en un referente de la identidad nacional. La publicación del Real decreto de 7 de septiembre de 1901 regularizando el servicio y entrada de todos los Museos de la Nación significaría la publicación de la institucionalización museística que había quedado limitada anteriormente a unos pocos eruditos y aficionados del arte. Se busca insertar al museo en la vida pública, darle su espacio social, convirtiéndole en referente cultural del pueblo, pautas en cierta manera parecidas a lo que había ocurrido en los ámbitos europeos. Ya en la Exposición de Motivos se alega al papel social del museo en el seno de la sociedad: *Una de las características del progreso moderno es la creación de Museos, centros docentes de que la erudición colecciona y expone al público en series ordenadas*

*metódicamente, conforme a los principios de la ciencia, los productos de la Naturaleza y del Arte, para conocimiento práctico y eternas enseñanzas de lo que son la realidad de la vida y las altas concepciones del espíritu. No hay, por consiguiente, fuentes del saber más puras ni mejores que los museos, puesto que en ellos se contemplan los productos naturales en su infinita variedad, los seres en sus numerosas especies y las ideas tal como brotaron de los genios y se perpetuaron en el gusto de las épocas, cuya sucesión constituye la Historia, admirable libro de doctrina y constante enseñanza de lo presente. Pero en España, por causas diversas, los Museos no gozan de aquella estimación general que por tal alto concepto merecen; hay quien los considera entidades de mero lujo, como si la instrucción lo fuera en las sociedades modernas; hay quien piensa que son instituciones accesorias; hay quienes creen que solo son centros propios de los sabios y personas ilustradas, donde el vulgo, por consiguiente, nada tiene que aprender. Mientras la ignorancia propala tales errores, multitud de extranjeros pasan las fronteras atraídos por la fama de la cultura europea ha extendido de nuestros antiguos monumentos y nuestros Museos, en lo que se exhiben y custodian obras incomparables. Es menester, por consiguiente, fomentar el amor a tales Centros de riqueza intelectual, procurando, en primer término, que la masa general del país encuentre libre y sin dificultad alguna la entrada en ellos; que los considere como cosa propia; que les cobre la estimación que merece y reclama el tesoro nacional que constituyen. De esta manera la entrada de los museos públicos sería pública, gratuita y sin papeleta todos los días del año, sin exceptuar los festivos y los lluviosos, y en el transcurso del mayor número posible de horas (art.1), al mismo tiempo que sería gratuita toda autorización para tomar notas, sacar copias, fotografías u otra clase de reproducciones de las obras que se conserven en los Museos (art.3), así como Los Directores de los Museos organizarían series o cursos de conferencias prácticas con el objetivo de difundir los conocimientos generales entre la masa común del público, y al efecto pudieran compartir ese trabajo con el personal técnico a sus órdenes o invitar a personas de reconocida reputación (art.4).*

**4.4.2.5. La institucionalización administrativa de los Museos Públicos: la promulgación del Real Decreto del 29 de noviembre de 1901 por el que se aprobaba el Reglamento para el régimen de los museos regidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueológicos.**

El Reglamento se puede considerar un precedente inmediato de la posterior Ley de 1915, especialmente en orden a la catalogación y elaboración de Inventarios que había sido uno de los objetivos más primordiales de la legislación española. De esta manera en el artículo 37 se establecía los siguientes instrumentos: 37. *Para la buena organización técnica de los Museos, en todos ellos se deberán redactar separadamente: 1º. Un inventario general; 2º. Un Catálogo sistemático; 3º. Un Catálogo monográfico y 4º. Una guía sucinta de todo el Museo.* Entre los artículos 38 y 40 se dispondrían de manera minuciosa la manera de elaborar el catálogo y el inventario: 38. *El Inventario General se llevará por orden cronológico de la entrada de los objetos en el Museo. Se formará, con los datos proporcionados por las personas que los donaran, vendieran o entregaran por cualquier concepto, haciendo constar su origen, así como su verdadera procedencia o yacimiento y el precio en que fueron adquiridos. Se*

*describirán los objetos por su aspecto externo y vulgar, reservando la clasificación técnica para el Catálogo sistemático (...). 39. El Catálogo sistemático de los Museos que ya no lo tuvieran publicado o redactado, se formará con arreglo al cuadro de clasificación e instrucciones formuladas por la Junta Facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 40. Además de los Catálogos sistemáticos, y después terminados éstos, se irán redactados monografías de los objetos del Museo, que en su día ordenadas, formulada el Catálogo monográfico.*

#### **4.4.2.6. Un proyecto de adquisición de bienes artísticos por parte del Estado para el Museo del Prado: La propuesta de derecho de retracto del Marqués de Montesa en el Congreso de Diputados en 1902.**

El debate sobre el estado de los museos públicos producido el 24 de enero de 1902 va a incluir una interesante propuesta del Marqués de Montesa sobre adquisición de obras de arte para el Museo del Prado, que en cierta forma se estaba induciendo a definir un derecho de retracto que sería la pieza fundamental para encajar definitivamente la tutela pública del Estado sobre los bienes artísticos. La carencia de un gran número de obras por parte del Museo público por antonomasia sería el punto de arranque de su propuesta: (...) *El Museo de Pinturas del Prado (...) es, por la cantidad y la calidad de las obras que allí se encierran, la colección de pinturas más interesante y más importante, puede afirmarse, así, en redondo, que existe en parte alguna. Pero algo le falta para ser un verdadero museo, si es que por museo se entiende, como a mi juicio debe entenderse, una colección de obras que permita estudiar un arte en todas y en cada una de las épocas correlativamente (...) Desde luego posee el Museo del Prado una colección de obras de las escuelas españolas de muchísima importancia, de una importancia extraordinaria, lo que permite, con muy ligeras excepciones, estudiar el curso de la pintura española en aquella colección. Algunas lagunas se observan, y especialmente una, sobre la cual me permito llamar la atención del Sr. Ministro, y que es una de las causas poderosas que ha habido y que ha tenido en cuenta para su acertada medida, de disponer de una manera resuelta y enérgica que fueran los cuadros existentes en la Academia de San Fernando al Museo de Pinturas para completar los allí existentes, porque antes de eso se daba el caso de que, habiendo, por ejemplo, en el Museo del Prado 50 obras, próximamente, de Murillo, y unas 60 de Goya, ni Goya ni Murillo podían estudiarse cumplidamente en el Museo del Prado, puestos que sus obras más geniales, más típicas, se encontraban en la Academia de San Fernando. Hoy, gracias, a la acertada medida del Sr. Ministro, esta deficiencia se ha subsanado, y los extranjeros y los artistas y aficionados españoles pueden estudiar a Goya y a Murillo perfectamente en el Museo del Prado*<sup>2576</sup>.

Alude al mismo tiempo a la laguna que existía de un gran número de artistas de pintura extranjera en las colecciones del Museo del Prado, por lo que insta a que sean adquiridos por el Estado, por lo que propone que fueran adquiridos de los Museos Provinciales, a cambio de donarle alguna obra que : *Algunas de las obras que en nuestros Museos se echan de menos, o que están débilmente representadas, podrán adquirirse sin salir de España en algunos Museos*

---

<sup>2576</sup> Diario de las Cortes, Núm.104, 24 de enero de 1902, pp.3061.



provinciales, en los que hay obras de mucho interés, a cambio quizás, y sin desembolsos por el momento, de otras obras que en el Museo del Prado existen con exceso, sin una necesidad perentoria, y que en esos museos provinciales no tienen y recibirían con muchísimo agrado. Pero lo que más llama la atención es su propuesta de adquisición pública del Estado con destino al Museo Nacional, con la creación de un expositor permanente donde se compraran obras de arte, siendo el Estado un virtual comprador, a modo de derecho de retracto: *Otro medio que también podría valerse el Estado para adquirir en condiciones favorables obras de arte sería la creación en España de una Exposición permanente, algo así como el Hotel de Ventas que existe en casi todas las capitales importantes del extranjero, al cual, dividido en dos secciones de arte antiguo y moderno, podrían llevar los artistas y particulares aquellas obras de que quisieran o tuvieras necesidad de desprenderse, pasando por un jurado de admisión que declarara si se trataba realmente de una obra de arte o no, y marcando un precio el vendedor o expositor. A este local acudirían compradores extranjeros o españoles; si la obra se vendía, recibiría el Estado un tanto por ciento de comisión, y si no se vendía, pasado el tiempo convenido, la retiraría su dueño, abonando una pequeñísima comisión. Al mismo tiempo se podría poner la condición de que el Estado podría adquirir cualquier obra con un tanto por ciento de rebaja del precio señalado por el vendedor, y éste se compensaría de este pequeño sacrificio que hacía, por la satisfacción de ver su obra adquirida por el Estado para exponerse en un museo público; y el Estado tendría la ventaja sobre cualquier comprador, de poder adquirir con un beneficio las obras de arte*<sup>2577</sup>.

**4.4.2.7. El destino de los bienes arqueológicos de excavaciones arqueológicas. El Real decreto de 29 de noviembre de 1901 por el que se aprueba el Reglamento para el régimen de los Museos Arqueológicos del Estado.**

El resultado de estas excavaciones arqueológicas se convirtieron en un verdadero instrumento de divulgación cultural, ya que muchos de estos bienes arqueológicos no quedaron solamente en el simple deseo de coleccionar por parte del arqueólogo-propietario de los bienes, sino que al mismo tiempo fundarían museos de ámbitos arqueológicos o incluso donarían algunas de estas obras al Estado para los museos arqueológicos públicos que estaban generándose en España. **El 29 de noviembre de 1901** sería promulgado el Real decreto por el que se aprobaba el Reglamento para el régimen de los Museos Arqueológicos del Estado. La disposición incluiría una clasificación de los museos públicos que estuviesen regidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en tres clases, estableciendo que sería Museo de primera clase, el Arqueológico Nacional; de segunda clase, el de Reproducciones Artísticas y el Arqueológico de Tarragona y de tercera clase, los de Barcelona, Granada, Sevilla, Valladolid, Toledo, Cádiz, Córdoba, León, Burgos, Murcia y Santiago, precisándose que dicha clasificación podía ser alterada por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, oyendo antes

<sup>2577</sup> Diario de las Cortes, Núm.104, 24 de enero de 1902, pp.3061-3062.

a la Junta facultativa del Cuerpo (art.1º). Los Jefes de los Museos Arqueológicos Nacional y de Reproducciones Artísticas, respectivamente, como Directores de establecimiento, ostentarían la plena dirección científica, técnica y administrativa, salvo la superior autoridad del Ministro y del Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.2). El Museo Arqueológico Nacional, como establecimiento de primera clase, tendría una Junta del Gobierno, en la forma y con las facultades que establece el reglamento orgánico del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (art.3). Se establecería a su vez la obligación de redactar en todos los museos Un inventario general; Un Catálogo sistemático; Un Catálogo monográfico y una guía sucinta de todo el Museo. Estos Catálogos, tendrían que ser redactados en cédulas sueltas, y la guía, en forma de libro (art.37).

---

**CAPITULO VI: LA REGULACIÓN JURIDICA DEL PATRIMONIO  
MONUMENTAL EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DEL  
REGENERACIONISMO: UNA NUEVA POLÍTICA DE INTERVENCIÓN  
PÚBLICA EN EL PATRIMONIO MONUMENTAL.**

---

Uno de los primeros retos de la Nueva Monarquía de Alfonso XIII será la construcción de un renovado sistema político que pusiera orden a las controversias que estaban ocurriendo en las múltiples y contradictorias posiciones que habían surgidos a raíz de la crisis del 98. Como apunta Pere Grabiell de entrada *parecía clara la necesidad de modificar las bases tradicionales de aquel mundo de la política oficial que aparecía ahora como insoportablemente reducido, encerrado dentro de los límites que marcaban unas pequeñas oligarquías económicas y sociales y una muy limitada clase política. Inexcusablemente había que ampliar el alcance y número de los sectores protagonistas de la vida política pero conservando la neutralización de las masas, siempre peligrosas (...) No se trataba sólo de fijar unas nuevas reglas del juego político, había que reformar el propio edificio del Estado, abocado éste a una obligada readaptación a la nueva realidad de un Estado y un país sin colonias y a una machaconamente deseada modernización de la administración. Surge en este contexto el movimiento político, social y cultural que iba ser conocido con el denominador común del Regeneracionismo.* En el plano puramente político, dos claros protagonistas van a llenar este periodo: Antonio Maura (1853-1925) y José Canalejas. El famoso discurso de Antonio Maura pronunciado en Valladolid el 18 de enero de 1902, define ampliamente en que se va a fundamentar la primera fase del regeneracionismo, al formular la necesidad de llevar a cabo una revolución desde arriba: *Ahora más que nunca es menester que la Nación sienta que el poder público asiste a sus necesidades y emprende siquiera el camino de aquella regeneración, tan vanamente cantada en todas las lenguas. Ya no hay tiempo para el orden ni para el método, no se puede ir con parsimonia a la realización de la obra, hay que hacer la revolución desde el gobierno, porque si no se hará desde abajo y será asoladora, ineficaz y vergonzosa, y probablemente la disolución de la nación española.* Bajo la presidencia de los Gobiernos que en dos etapas (entre 1903 y 1904 y el llamado Gobierno Largo entre 1907 y 1909), intentaría poner en praxis las bases ideológicas de la llamada regeneración maurista. Entre ellas cabría señalar el proyecto de la reforma de la administración local presentada en primero en el Senado en mayo de 1903 y posteriormente en el Congreso de Diputados el 5 de febrero de 1909, que encontraría una amplia oposición desde sus propias filas, que haría tambalear el sistema obsoleto del caciquismo y el proyecto de ley de la reforma del Código Penal. Sin embargo, el maurismo no llegaría a resolver los problemas administrativos ni de orden público que en España se estaban produciendo en los primeros años del siglo XX, como quedaría reflejada en los acontecimientos suscitados en Barcelona en 1909 bajo el nombre de Semana Trágica. La otra cara del regeneracionismo lo puede constituir el papel del

partido liberal con la figura de José Canalejas, formado en la Institución Libre de Enseñanza,

Como reflejo del espíritu nacionalista que aparece inmerso a comienzo del siglo XX fundamentado en el regeneracionismo, el Estado se va a convertir en un verdadero promotor de divulgación de la cultura nacional, para lo que diseña un verdadero programa publicitario donde se reflejara la grandeza del país, especialmente en aquellos ilustres personajes que lo habían engrandecido en el pasado. De ahí que se promulgase a raíz del **Real decreto de 19 de octubre de 1906** por el que se creaba en Madrid una Junta de Iconografía Nacional. Una vez más el Estado se convierte en un verdadero coleccionista de obras de arte, no por una intención meramente de interés histórico o artístico, sino por una instrumentalización de propaganda política en que se quiere volver a recuperar un espíritu nacional hundido tras el desastre de 1898, reflejado en la propia Exposición de Motivos: *El Ministro que suscribe, persuadido de que el pensamiento obedecía a una necesidad impuesta por el patriotismo y el ansia de cultura, propone de nuevo la creación de aquella Junta, pretendiendo darle el carácter práctico que demandan los estudios artísticos e históricos, con unos tintes claramente nacionalista será base principal de los trabajos de la Junta la conveniencia de atender, según los casos, al valor artístico del retrato, a la importancia del retratado, al origen de la obra y a todo lo que ésta ofrezca susceptible de provechoso estudio por cualquier concepto*<sup>2578</sup>.

### **1. La construcción del Patrimonio Monumental como bien de interés público en la etapa del Regeneracionismo.**

Si tuviéramos que definir la etapa del Regeneracionismo en el ámbito de los derechos patrimoniales tendríamos que asignarle el término de equilibrada, al seguir considerándose como base legítima del orden político-jurídico de los derechos individuales, el derecho de la propiedad privada, y al mismo tiempo dando un papel primordial al Estado en algunos ámbitos públicos, como la regulación de las múltiples obras públicas que van a ir incrementando la política de expropiación forzosa por utilidad pública, que va a significar una quebradura del derecho exclusivo del individuo sobre su propio bien. No debemos olvidar la llamada cuestión social que va ir generándose en los albores del siglo XX, por lo que un mayor número de sectores sociales irán protagonizando un papel en la vida política que hasta ahora habían quedado ajeno al mismo, por lo que irán quebrándose la imagen del ciudadano-propietario propio de las etapas anteriores para ser sustituidos por una nueva formulación de ciudadano participe de la vida pública. Como reflejo de lo anterior, el régimen jurídico del Patrimonio Monumental va a sufrir al mismo tiempo una clara transformación, que podríamos calificar de ruptura con la

---

<sup>2578</sup> Colección Legislativa, Tomo XXVIII, Madrid, Imprenta Revista de Legislación, 1907, p.329; Gaceta de Madrid, 15 de marzo de 1907.

legislación anterior, aunque manteniendo al mismo tiempo algunos vestigios de la línea más ortodoxa liberal-conservadora.

El derecho de la propiedad en la etapa del Regeneracionismo (19-192)	Régimen de la propiedad en el sistema jurídico español	Régimen de la propiedad monumental en el sistema jurídico español
Propiedad Privada	Limitación a la propiedad privada.	El bien histórico-artístico se sigue considerando un bien inherente a su propietario que genera una serie de derechos inamovibles.  Limitación a la propiedad privada de los bienes de interés histórico y artístico, por lo que se incrementan los deberes de conservación y restauración por parte de sus propietarios.
Interés general	Se intensifica el intervencionismo administrativo bajo utilidad pública	El Estado intervendrá en la tutela pública de aquellos bienes que considere de mérito artístico, histórico o arqueológico, aunque siempre respetando el derecho de la propiedad de su respectivos dueños.

### **1.1 La incipiente función social de la propiedad en la España de Alfonso XIII: Un equilibrio moderado entre el derecho de la propiedad privada y los intereses generales.**

Con el inicio del siglo XX se va ir asistiendo en el seno de la doctrina jurídica y política una nueva concepción del Estado, que va ir desmoronando a las tesis liberales que hasta este momento habían delimitado su concepción, por lo que podemos afirmar que durante el reinado de Alfonso XIII se fue dando el paso de un Estado Liberal Absentista, a la concepción de un modelo de Estado intervencionista, que daría lugar a su propia crisis. No cabe duda de que un



amplio sector doctrinal seguiría defendiendo sin ningún tipo de tapujos el derecho absoluto de la propiedad privada como uno de los pilares primordiales de todo orden social. En el Discurso Inaugural del curso 1900-1901 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Raimundo Fernández Villaverde, titulado “La cuestión social y el Derecho Civil”, ponía en cuestión los llamados principios sociales: *La libertad civil y la propiedad individual son dos derechos sin los cuales todo el orden jurídico privado vendría a tierra como un edificio sin cimientos (...) Las instituciones civiles: familia, tutela, sucesiones, dominio, derechos reales, contratación, no podrán vivir nunca bajo la exclusiva reglamentación del Estado; descansarán, por el contrario sobre dos grandes principios jurídicos: la libertad y la propiedad individuales, inseparables de la sociedad (...)*<sup>2579</sup>. En una misma línea se pronunciaría Federico Carbonero en su opúsculo *La cuestión social y las escuelas socialistas*, publicado en 1903, alentando sobre la importancia de la propiedad privada en el fundamento organizativo del Estado<sup>2580</sup>.

Sin embargo, las ideas transformadoras del concepto absoluto del derecho de la propiedad privada y de la intervención del Estado fueron ganando adeptos en el sector doctrinal de principio del siglo XX, como receptores de la doctrina social europea que desde distintos ámbitos se estaban desarrollando en estos años, especialmente desde las filas del socialismo. Rafael Martínez Macarino publicaría en 1903 su obra *la propiedad inmueble improductiva*, donde ya aparece una incipiente defensa social de la propiedad. Una obra fundamental a la hora de concebir las transformaciones del derecho de la propiedad en España sería la obra de Gascón y Marín titulada *Limitaciones del Derecho de propiedad por interés público* publicada en 1906, Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde ya se enunciaba una nueva etapa en el ámbito del derecho de la propiedad privada en el ámbito legislativo español: *Las Leyes, al hablar de los derechos del propietario, ya por defender el derecho de otros sujetos individual y concretamente determinados, ya por el defender el de personas que puedan hallarse en ciertas condiciones, ya porque si el individuo es una parte del todo social, el interés social debe también ser defendido, hablan de limitaciones de derecho de propiedad (...)*<sup>2581</sup>. A lo que añadía la tesis ya difundida en la doctrina europea, de que el interés público se concebía como superpuesto a los intereses privados, especialmente en el derecho de la propiedad privada: *El interés público, el interés social, muéstrase como fuente de limitaciones del derecho de propiedad (...)*<sup>2582</sup>. Incluso la cuestión social se convertía en el factor determinante de la ordenación jurídica española: *Asistimos al periodo de la propiedad libre, individual,*

---

<sup>2579</sup> FERNANDEZ VILLAVARDE, R. “La Cuestión social y el Derecho Civil” en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Tomo 97, Madrid, 1900, p.119.

<sup>2580</sup> CARBONERO, Federico *La cuestión social y las escuelas socialistas*, Valladolid, 1903.

<sup>2581</sup> GASCON Y MARÍN, José *Limitaciones del Derecho de propiedad por interés público*, Madrid, 1906, p.9.

<sup>2582</sup> GASCON Y MARÍN, José, 1906, p.10.

*transmisible; pero asistimos al final del periodo netamente individualista (...) No puede desconocerse que en la propiedad hay una cierta función social. Y si ese elemento, ese algo social existe en la propiedad, el derecho a ella estará también limitado en relación a este elemento (...)*<sup>2583</sup>.

En el ámbito del Derecho Civil también se estarían dando algunos pasos de cambios, como quedaría reflejado en la obra de Pedro Dorado *Hacia un nuevo Derecho civil*, publicado en 1906 en la Revista General Legislativa y Jurista. Comenzaría dando una reflexión del estado en que se encontraba en este momento el Derecho Civil español, fundamentada en el concepto absoluto de la propiedad: *Nuestro actual Derecho Civil, que es en su mayor parte todavía el derecho antiguo, consiste en un sistema de fuerzas protectoras de la propiedad, y singularmente de la propiedad inmueble (...) la casi totalidad de los preceptos del Derecho civil tradicional son preceptos encaminados a garantizar esa forma de propiedad, su posesión, su adquisición (...) El propietario tiene autorización, que es decir, fuerza y poder bastantes para dar a sus cosas el destino que bien le plazca, o para no darles ninguno. El propietario tiene autorización, que es decir, fuerza y poder bastantes para dar a sus cosas el destino que bien le plazca, o para no darles ninguno. Si la usa de modo que los demás tengan por acertado y conveniente, bien; si no lo hace así, lo mismo. Sin embargo, las nuevas concepciones del derecho de la propiedad quedarían reflejadas a la hora de configurar el derecho de la propiedad: Las concepciones van cambiando, y con ellas, poco a poco, el orden jurídico. La relación de la propiedad ha perdido algo su antiguo carácter absoluto (...) No vive éste solo en el mundo; convive con otros, y por eso su derecho no puede por menos de ser limitado en atención a estos últimos.* La nueva función social de la propiedad rompía el molde absolutista del derecho de la propiedad privada tradicional de inspiración burguesa: *la propiedad absoluta, al modo antiguo, exigiría que se respetase al terrateniente para que las cultivara si quería o las dejara improductivas en otro caso. Hoy parece que se camina hacia otra solución (...) Como se expropia por causa de utilidad pública al dueño de una casa o de un terreno por donde ha de atravesar un ferrocarril, se expropiará igualmente al que no saque rendimiento alguno de sus propiedades (...) Al dejar las cosas improductivas no es el propietario el único que recibe el daño, sino todo el mundo, porque se merma la riqueza social (...), resumiendo su concepción social en estos términos: donde antes predominaba absolutamente la propiedad privada y la libre competencia individual, se va obligando a ésta a ceder su puesto al interés común y a la conveniencia colectiva.*

En el discurso leído por José de Aldecoa y Villasante, Presidente del Tribunal Supremo, en la apertura de los Tribunales, celebrada el 15 de septiembre de 1914 se estaba ya insertando la nueva concepción social del derecho de la propiedad: *El concepto que se tenga y forme de la propiedad ha de ser, en mi sentir, el fundamento sobre el que deben descansar cuantas soluciones se busquen para tales problemas, pues si la propiedad en su sentido más amplio y*

<sup>2583</sup> GASCON Y MARÍN, José, 1906, p.19.

*comprendido es una verdadera prolongación de la personalidad identificada completamente con el individuo en su parte más espiritual, tiene en su aspecto objetivo todas aquellas limitaciones que son inherentes, unas a las imperfecciones de nuestro ser, otras a los obstáculos y conflictos con el derecho ajeno, siendo estos obstáculos y estos conflictos los que hay que estudiar para vencer los que se puedan y para armonizar los intereses con la aplicación de normas de Derecho. En los pueblos donde las castas, las clases y hasta las jerarquías aparecían profundamente marcadas, donde la verdadera personalidad sólo se revelaba en las capas superiores sociales, la propiedad, por consecuencia de este estado social, revistió un carácter absoluto, cuyas huellas se han conservado aún después de reconocida la igualdad de los derechos del hombre (...) Ius utendi, fruendi et abutendi, dijeron los jurisconsultos romanos que era el distintivo del dominio, como éste lo era el más característico de la propiedad (...) Pues bien; en mi sentir, el concepto de la propiedad, cuando legalmente se trata de ella, no puede ni debe desligarse del profundo sentido moral que entraña en las relaciones de unos individuos con otros (...) y no puede por tanto ni debe ser absoluto (...) y así como el principio de la libertad individual se encuentra moderado y atenuado al ejercitarse por cuantos conviven dentro de una asociación, así el dominio que implica la propiedad ha de estar encerrado, en primer término, dentro de los límites de la moral; y en segundo, condicionado por los intereses superiores de la colectividad (...) Sobre esta base, y con sujeción a tales principios, no es sostenible, por ejemplo, que ejercite un derecho quien, a título de dueño, destruye caprichosamente un valor cualquiera de su propiedad (...) en general, quien no da a sus bienes el debido destino en armonía de los preceptos de la moral (...) y determinado el verdadero concepto de la propiedad sobre estas bases, es como las leyes podrían desarrollarse en cada caso, según las necesidades que se vayan sintiendo, sin violar el fundamento en que aquella descansa, ya que todas las fórmulas del derecho, lo mismo en la vida civil y política que en la económica, aparecen o se van desenvolviendo a medida que surgen nuevas necesidades en la vida de relación de los individuos de cualquier Estado y de los Estados entre sí. Es ya insostenible el antiguo concepto que acerca de la propiedad tenía la legislación romana reconociendo al propietario el derecho al abuso como característico distintivo del dominio que hasta nuestros días se ha conservado, aunque en la realidad haya sido atenuado por algunos preceptos que como antes indiqué, más se relacionan con la capacidad jurídica del individuo que con las condiciones esenciales de la misma propiedad<sup>2584</sup>. Un año después, el 15 de septiembre de 1915, Manuel de Burgos y Mazo, Ministro de Gracia y Justicia, en la solemne apertura de los Tribunales, nuevamente realzaría la idea de una función social del derecho de la propiedad armonizada con la concepción individualista de la misma: La propiedad es complemento del individuo, indudablemente, como es elemento indispensable para la vida social; el derecho, pues, de gozarla surge de la necesidad individual en armonía con la colectiva, y es medio para conseguir fines temporales y contingentes en el hombre, necesarios y perpetuos en la sociedad, porque la vida del hombre sobre la tierra es efímera y la de la sociedad perdura, por lo cual, claro es, el carácter social de la propiedad ha de ser*

---

<sup>2584</sup> ALDECOA Y VILLASANTE, José “La evolución del concepto de la propiedad y el problema de los foros” *Revista de Legislación*, Tomo 125, Madrid, 1914, pp.180-183.

*predominante sobre el individual*<sup>2585</sup>. Castan en el artículo titulado la socialización del derecho en 1915 ya apostaba por la armonía del interés social con el individual en el ámbito de la propiedad privada, en el contexto general de reforma del Derecho Privado que se estaba produciendo en el ámbito legislativo español.

De la misma manera que se reivindicaba una transformación del derecho absoluto del derecho de la propiedad privada, se comenzaría a exigir la intervención del Estado en el terreno del derecho de la propiedad. La lectura del artículo del jurista P. Dorado titulado *Valor y Función del Estado* publicado en la Revista de Legislación en 1908 ya nos induce claramente a percibir esta tendencia renovadora del papel del Estado en el seno de la sociedad. De ella hemos extraídos este texto: *Ya se sabe lo que el Estado tenía que ser para lo que sobre él y sobre sus peculiaridades fines discurrían: había de limitarse a obrar dentro de la pura esfera política y jurídica (defenderse contra las agresiones exteriores, mediante la guerra, y contra las interiores, mediante la administración de justicia), abandonando a la iniciativa individual los fines de cultura, de beneficencia, de desarrollo y perfeccionamiento, de los cuales si alguna vez se hacía cargo, había de ser pro tempore (...) El Estado que se buscaba era un Estado lo más abstencionista posible, el Estado del laissez faire, el Estado de acción social casi negativa, el Estado gendarme, policía, guardia civil, que se limita a guardar el orden material y deja del todo libres en sus movimientos y en sus recíprocas relaciones a los ciudadanos. Pues bien, aun cuando no falta quien hoy mismo sostiene todavía tales puntos de vista, la verdad es que la marcha de las cosas se desenvuelven sin hacerle caso. El estado moderno es esencialmente un Estado intervencionista, un Estado de cultura social, como empezaron a llamarlo algunos en Alemania (...). Apenas hay materia de bienestar social y de relaciones entre los individuos en que no se meta. Multitud de cosas, antes consideradas como de pura discreción individual y en las que nadie pensaba que pudiera intervenir o volver a intervenir, como en otras épocas lo había hecho, el Estado va siendo regulado por éste. En todo lo que los hombres hacen se encuentra cada vez más claramente un aspecto social, y en nombre del interés social se cree autorizado para intervenir el Estado, y todo el mundo solicita esta intervención*<sup>2586</sup>.

En el terreno del derecho positivo, la legislación urbanística y el debate en torno a la cuestión agraria van a ser los ámbitos en que van a madurar las nuevas concepciones sobre la función social de la propiedad y de la expropiación. La reforma de la propiedad agraria se venía planteando desde la Primera Guerra Mundial, primero por vías puramente fiscales, el Proyecto de Ley sobre Aumento del Valor de la Propiedad Inmueble y el Régimen Fiscal de S. Alba (1916) y después a través de la combinación de la fiscalidad y la expropiación con el Proyecto de Ley sobre Colonización y Repoblación

<sup>2585</sup> BURGOS Y MAZO, Manuel “La socialización del derecho”, *Revista de Legislación*, Tomo 127, Madrid, 1915 p.231.

<sup>2586</sup> DORADO, P. “Valor y función del Estado Madrid”, *Revista de Legislación*, Madrid, Imprenta de la Revista de la Legislación, 1908, N.109, pp.30-31.

Interior de Sanz Escartín de 1921, proyectos que fracasaron por la incapacidad del sistema político<sup>2587</sup>. El régimen legal de la agricultura se hará eco del profundo cambio dogmático experimentado en torno al derecho de la propiedad privada. La historia legislativa evidencia que este deber se ha abierto paso a través de la función social, que no es sino una expresión de esta, aplicada al campo agrario. Desde la Ley de 1907, de Colonización y Repoblación Interior hasta la Constitución de 1931, influenciada por la de Querétano (1916) y Weimar (1919), se aprecia un progresivo avance: aumento de las limitaciones en la propiedad y del ámbito de la expropiación; conversión paulatina de los deberes pasivos en positivos; desarrollo de la propiedad pública (...), e incluso la expropiación por interés social, con el deber de cultivar todas las tierras productivas, incluidas las del ámbito privado<sup>2588</sup>. Ya en 1923 Martín Retortillo se cuestionaba la configuración tradicional del derecho de la propiedad en un artículo dedicado a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública aparecido en la Revista de Legislación: En camino de esa evolución estamos. A la propiedad derecho absoluto, ha sucedido la propiedad con una función social que cumplir<sup>2589</sup>. Salvador Minguijón defendería en su libro la propiedad y el trabajo: *La propiedad es un derecho de gestión, no es un derecho de arrendamiento o estancamiento de fuerzas que son necesarias (...) Que un derecho sea natural, no quiere decir que sea absoluto e independiente del interés nacional, ha de estar limitado por su propia naturaleza y por el derecho de la sociedad (...) Cuando la propiedad se rebela contra su propia función convirtiéndose en obstáculo para la producción (...) Cuando el interés privado se pone frente al interés social no hay título jurídico que lo legitime y la sociedad que esto ampare se negaría asimismo.*

En los diversos debates parlamentarios de este periodo se sigue aludiendo al carácter sagrado del derecho de la propiedad privada, pero al mismo tiempo se defiende por parte de los sectores más progresistas la impronta del interés general. Así en el debate del Congreso del 6 de febrero de 1908 el diputado Moret exponía que a pesar de la impronta del derecho de la propiedad privada en el orden jurídico, existían casos en que los intereses generales se superponían, traduciendo en una intervención del Estado: *¿Hay derecho para todos más innegable, más incuestionable, que el derecho de propiedad? Pues ese derecho, cuando se encuentra enfrente de los intereses públicos para trazar un camino o un ferrocarril, para hacer una obra hidráulica, por razón de higiene, etc., cede ante la expropiación, que es fórmula con la cual pasa el interés público por encima del derecho privado*<sup>2590</sup>. En la sesión del Senado de 27 de abril de 1922 se reafirmaba la

---

<sup>2587</sup> BASSOLS COMA, Martín, 1985, pp.116-117.

<sup>2588</sup> BARNES VAZQUEZ, Javier *La propiedad constitucional. El estatuto jurídico del suelo agrario*, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 1988, pp.555-556.

<sup>2589</sup> MARTÍN RETORTILLO, Cirilo "Breves notas sobre la expropiación forzosa por causa de utilidad pública", *Revista de Legislación*, Año LXXI, Tomo 142, Madrid, Editorial Reus, 1923, p.55.

<sup>2590</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso de los Diputados, Sesión del 6 de febrero de 1908, Núm.142, pp.4441. El debate que se estaba produciendo giraba en torno a la posibilidad



nueva concepción del derecho de la propiedad como símbolo de la crisis del Estado Liberal. De esta manera el senador Azpeitia afirmaría que el concepto exageradamente individualista que acerca de la propiedad tuvo el Derecho romano, y que reproduce nuestro Código Civil, copiándolo a su vez del Código de Napoleón. Su señoría dice, como aquellos Códigos que el dueño y el señor absoluto, que él tiene todos los derechos. Y yo le digo a S.S. que, al lado de ese concepto arcaico del Derecho romano, hay otro elemento de la propiedad, fundamental, sin carácter social; o, lo que es igual, que hay que armonizar el elemento individual y el social, y que cuando ocurre un desequilibrio, el elemento social absorbe al individual, cosa que siempre acontece (...) *Lo que sí creo es que la doctrina que tenemos que defender nosotros los liberales es la de que el derecho de la propiedad no puede ser hoy el mismo que el del pasado, el que aprendimos en las aulas, porque aquel derecho es absurdo y egoísta (...)*<sup>2591</sup>. Unos meses más tarde el 19 de junio de 1922, el Ministro de Hacienda, Bergamín, declaraba en el Senado sobre la nueva concepción del derecho de la propiedad: *creo que el derecho de la propiedad privada va unido a la personalidad humana que, sin propiedad individual, no podría haber persona, como no podría haber sociedad; porque de alguna manera nosotros siempre estamos constituyendo una propiedad individual, nos apoderamos de algo personalmente de que no se apoderan los otros, sin lo cual no viviríamos (...)* Este concepto tengo yo de la propiedad individual; pero al creer esto, ¿significa que he de entender que el derecho de propiedad y dominio ha de seguirse interpretando en la ley y en la práctica como se interpretaba y definía en el derecho romano? (...) Pues bien; yo soy de los que creen que nuestra propiedad tiene necesariamente que sufrir modificaciones esenciales. ¿En cuánto es consustancial con ella? ¿En cuánto representa el derecho? (...) subordinando el egoísmo individual al bien común; sometiendo la persona a la sociedad en que vive; que, después de todo, aunque yo admita siempre la persona como algo superior que no puede dejar de existir (...) entiendo que hay que subordinar siempre lo intransigente del derecho individual al derecho colectivo<sup>2592</sup>. En el análisis que realizaría sobre la expropiación forzosa el jurista Julio Piernas sintetiza la concepción revisora del derecho de la propiedad: *La propiedad es una relación del hombre con la Naturaleza; de dominio y disposición de los seres inferiores. El fin de esa relación consiste en la satisfacción de las necesidades humanas, porque el hombre se encuentra aquejado por múltiples exigencias que ha de atender con la utilidad de los objetos sensibles, siendo éstos complemento de su existencia y un modo de hacer posible su vitalidad (...)* La razón, el fundamento de la propiedad por lo tanto, está en la limitación del sujeto por una parte, y en la limitación por otra de las cosas útiles de la Naturaleza (...) la disposición del hombre sobre las cosas no es caprichosa ni arbitraria, sino que tiene por límites el de las necesidades para que sirven (...) Resulta, pues, que la propiedad privada sufre varias limitaciones por el Estado, ya por la necesidad que tiene de contribuir a las cargas públicas, ya por

---

de indemnizar a las Comunidades religiosas por los conventos que se incautó el Estado a raíz de las medidas desamortizadoras.

<sup>2591</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.27, Sección de 27 de abril de 1922, pp.498-499.

<sup>2592</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.54, Sección de 19 de junio de 1922, p.1089.

*hacer compatible el interés general con su goce y disfrute, y que pueden reducirse a las siguientes: expropiación forzosa, impuestos, servidumbres de utilidad pública (...)*<sup>2593</sup>.

## **1.2. Una nueva concepción pública del Patrimonio Monumental como objeto tutelar del Estado.**

### **1.2.1. El arte al servicio del Estado.**

El concepto de obra de arte va a sufrir una nueva transformación, al ampliarse el número de bienes, como podemos apreciar en el artículo 2º del Convenio celebrado en Berna del 7 de septiembre de 1910, ratificado por España, que consideraba obra de artes y literarias toda producción del dominio literario, científico o artístico, cualquiera que sea la manera o forma de reproducción, como libros, folletos y otros escritos; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas (...) las composiciones musicales con palabras o sin palabras; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabados y litografía; las ilustraciones, las cartas geográficas; los planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, la topografía, la arquitectura o a las ciencias<sup>2594</sup>. La reclamación de un arte nacional de tintes excluyentes no va a seguir siendo ajeno a esta etapa. Un ejemplo significativo podemos observarlo en el debate producido en el Congreso el 28 de febrero de 1908 entre el Ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro y el diputado Puig y Cadafalch sobre el reglamento de la Exposición Nacional que se iba a celebrar ese año. La intervención del Ministro es ilustrativa al respecto al precisar que los artistas extranjeros no se le concederían ningún premio al no aportar nada al arte nacional: *El Sr. Puig y Cadafalch olvida seguramente para sus observaciones el carácter de las exposiciones a que nos estamos refiriendo, que es un carácter eminentemente nacional, para fomentar el arte nacional, no para fomentar el arte en absoluto. Así es que los extranjeros, si bien son admitidos en la Exposición (...) no puede obtener premio ninguno en ella, porque no son los verdaderamente llamados a realizar los fines con que el Estado español hace los sacrificios que representa la Exposición, que son los de fomentar el arte nacional (...) este es el propósito del esfuerzo que realiza el Estado, el de desenvolver y fomentar el arte nacional, comprenderá S.S. que no se puede llegar a esos extremos de cosmopolitismo a que tendríamos que llegar si se siguieran todas las indicaciones de S.S.*<sup>2595</sup>.

### **1.2.2. La quiebra del concepto jurídico del Patrimonio Monumental como bien inherente al propietario en la España de Alfonso XIII.**

La tutela pública del Patrimonio Monumental como en las etapas anteriores dependerá del régimen jurídico de carácter patrimonialista de los

---

<sup>2593</sup> PIERNA Y DE TINEO, Julio *La expropiación forzosa considerada en los principios y en sus modernas aplicaciones*. Madrid, 1908, pp.15-18.

<sup>2594</sup> Colección legislativa de España, Vol.2º. de 1910, junio a septiembre, Imp. Revista de Legislación, Madrid, 1910, p.577.

<sup>2595</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Sesión de 28 de febrero de 1908, Núm.161, p.4981.

mismos. No podemos definir en principio como lo haríamos en términos contemporáneos en este periodo los bienes históricos-artísticos de propiedad estatal como de dominio público, pero no cabe duda que aquellos que han quedado incluidos en la esfera de la propiedad pública van a empezar a tener una especial consideración en torno a su protección y conservación. La lista de los bienes históricos-artísticos de propiedad pública se ha ido incrementando, pudiendo resumir en los siguientes bloques de bienes:

1º) Los bienes inmuebles que como producto de la desamortización han quedado en su poder y que han sido reconvertidos en bienes de utilidad pública, al ser transformados en hospitales, edificios educativos o cuarteles.

2º) Los bienes muebles de interés público de carácter histórico-artístico ubicados en los museos, cuya red se irá incrementando a lo largo de estos años, e incluso cambiara su propio carácter. Al mismo tiempo el Estado irá adquiriendo un amplio número de bienes, bien por donación, permuta o compra.

3º) Algunos terrenos que se irán publicando para una mejor tutela de los mismos, al ser adquiridos sus territorios, bien mediante adquisición voluntaria, bien mediante la expropiación pública por utilidad pública.

4º) Se puede intuir una concepción de dominio público en la naturaleza jurídica de los bienes arqueológicos.

Al mismo tiempo se incrementa una figura jurídica muy discutida que había nacido en etapas anteriores, cuya naturaleza jurídica no queda clara: El Monumento Nacional Histórico y Artístico, probablemente la denominación más común de estos años. Y es que tiene un carácter híbrido en el sentido de que por un lado en algunos bienes siguen formando parte del dominio privado, y otros aparecen claramente de propiedad pública. En los debates parlamentarios producidos en estos años se puede observar claramente la tesis mayoritariamente defendida que el hecho de que un bien sea declarado Monumento Nacional no implica que entre a formar parte de la propiedad del Estado, aunque habrá voces contrarias al respecto. Al mismo tiempo, se reconocerá en ellos, aunque sean de dominio privado, la potestad del Estado en los ámbitos de conservación y restauración. Cabe mencionar aquí que a pesar de que se incremente la lista de estos bienes específicos, quedará muy reducida en el conjunto total de la riqueza artística nacional.

Los límites tutelares del Estado en el ámbito de la esfera particular de particulares e instituciones, sean privadas o públicas.

1º) La tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico. Va a seguir siendo el verdadero campo de batalla entre el Estado y la Iglesia en el ámbito de aquellos bienes de interés histórico y artístico que son propiedad

eclesiástica. La propia naturaleza jurídica de los mismos así como el régimen de dominio sobre los mismos dará lugar a un amplio debate que culminará con la promulgación de un ordenamiento tutelar de los mismos.

2º) La tutela de las Corporaciones Municipales. Las Corporaciones Municipales, especialmente Ayuntamientos y Diputaciones van a ser limitados en este periodo por el propio Estado en aquellos casos que concibe su intervención, pudiendo limitar el derribo o venta de algunos edificios y bienes muebles.

3º) La tutela sobre instituciones culturales públicas. Un conflicto se producirá entre el Estado y las Reales Academias en torno al derecho de la propiedad de las colecciones de bienes de interés histórico y artístico, con motivo de la propuesta de traslado de algunos de sus cuadros al Museo del Prado.

4º) Los límites intervencionistas en la esfera de la propiedad privada. Nuevamente el Estado queda muy limitado en su intervención en la esfera privada del coleccionista, más aun cuando se está produciendo un fenómeno social y económico en estos primeros años del siglo XX: la aparición del mercado artístico. El propietario del bien tiene adherido en si mismo unos derechos a raíz de su adquisición, teoría liberal que habría nacido en los periodos anteriores. Sin embargo, en esta etapa ya se vislumbra con mayor intensidad unos límites de la acción del propietario sobre su propio bien, que no es ajeno a una nueva concepción del derecho de la propiedad privada. Más que una transformación del derecho privado de la propiedad monumental, asistimos a unos limitaciones de su derecho, que se reflejan especialmente en la política de exportación, donde el Estado, como garante del interés público, va a tener prioridad de adquisición, dando lugar a un verdadero derecho de tanteo y retracto, que quedará limitado en la mayoría de los casos, al contar con una reducida asignación presupuestaria.

### **1.2.3. Una nueva mirada del patrimonio monumental en la doctrina jurídica: Las tesis de Ramón Rodríguez Pascual.**

Entre 1913 y 1914 el diputado Ramón Rodríguez Pascual en unos artículos denominados La protección de las antigüedades en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos expondría las nuevas concepciones jurídicas que se estaban instando en el ámbito de la doctrina referente a la tutela pública del Patrimonio Monumental, inspiradas en muchos aspectos en el derecho italiano, concretamente en la Ley de 1902, que representaría sin duda alguna una nueva concepción al Patrimonio Monumental como bien tutelado por el Estado. Su exposición comenzaría por la necesidad de elaborar un registro que permitiera saber cuáles serían las obras que debían de ser protegidas por el Estado: *Desde el momento que considero que la propiedad de las antigüedades es una propiedad especial, en la que los derechos de los propietarios han de estar*

*limitados por los que en la nación tiene de ella, surge la necesidad, para garantía del propietario y de la nación a la vez, de conocer con exactitud qué cosas son objeto de esa propiedad, y como no pueden darse reglas precisas y claras para distinguir las obras de arte a que han de afectar las limitaciones, de las que pueden ser objeto de propiedad común, es necesario establecer un registro de aquellas. Al mismo tiempo justifica la limitación temporal de esta protección, al considerar que las obras contemporáneas debían quedar ajenos a esta tutela pública, al considerar que sería perjudicial no solamente para el propio creador sino también para los propios intereses del Estado: Según el principio establecido, parece lógico hacer extensivo el régimen especial de la propiedad artística a todas las obras de arte. Pero si aquel principio es cierto, también lo es que haciéndolo así se ocasionarían perjuicios a la propiedad privada, y, sobre todo, a los autores de las obras, sin beneficio para la nación (...) Prohibir la exportación, imponer derechos de extracción o limitar otro modo cualquiera el libre comercio de las obras contemporáneas, produciría únicamente como consecuencia la reducción de este comercio, ya por desgracia bastante limitado en España, donde los artistas han de recurrir con frecuencia al mercado extranjero para encontrar una remuneración adecuada a su trabajo, con lo cual, lejos de beneficiarse la producción artística nacional, se perjudicaría al privar a los artistas de los medios de ingresos más importantes; por otra parte, si el Estado hubiera de adquirir todas las obras cuya salida de España prohibiera, se exponía a tener que realizar un gasto excesivo. Por último, no es de presumir que presidiera un gran acierto en la elección de las obras que habían de adquirirse y de las que hubiera de permitirse exportar, pues de sobra es sabido que los contemporáneos no suelen ser buenos jueces del mérito de los artistas (...). Todas estas razones han tenido, sin duda, presentes las distintas legislaciones protectoras de las obras de arte para excluir de sus efectos las obras de autores contemporáneos (...)*

*¿Cuáles son los deberes y obligaciones que tiene un particular sobre la obra de arte que posee en su esfera privada? En principio señala que el Estado ostente la potestad de impedir la destrucción del bien de interés histórico y artístico de propiedad particular al ser considerado como un condominio: (...) Empezaré por el deber de conservar las obras y restaurarlas en caso preciso. Mucho se ha discutido acerca de la facultad de destruir por los propietarios las cosas objeto del derecho de la propiedad, negándose, muy fundadamente, por muchos, en nombre del carácter social que toda propiedad tiene; pero si respecto de la propiedad común puede discutirse, es indiscutible que en la propiedad artística, que como he dicho, es un condominio, no puede uno de los propietarios destruir la propiedad común. En armonía con este principio, la ley española vigente prohíbe los deterioros intencionados de las antigüedades (...). Sin embargo, precisa que no debe ser obligado ningún propietario a la reparación de su inmueble de interés histórico y artístico, dejando la puerta abierta a la expropiación pública: (...) Si no puede destruirla, ¿Cómo obligarle a hacer las obras de conservación o restauración necesarias? En mi entender, a esto no puede nunca obligarse al propietario, y si al ser necesaria una reparación él no quiere o no puede hacerla, ni renuncia a la propiedad del objeto, es preciso, a fin de evitar su ruina, expropiarle por causa de*



*utilidad pública, teniendo en cuenta, al hacer la valoración, la disminución que en el valor del objeto significa su amenaza de su destrucción.*

Las conclusiones que plantearía Rodríguez Pascual serían las bases doctrinales en que se fundamentaría los diversos proyectos de ley y las definitivas promulgaciones que se desarrollarían a lo largo del primer tercio del siglo. Por su importancia creo que sería fundamental recogerlas literalmente

**1º. Necesidad de la promulgación de una ley de antigüedades:** *El estado de abandono en que se encuentra en España la riqueza monumental y artística, cuya lenta desaparición constituye una vergüenza nacional, hace de urgente necesidad dictar una ley de protección de las antigüedades, ya que la legislación vigente es incompleta e ineficaz.*

**2º. La naturaleza jurídica específica de la propiedad de la obra de arte:** *El fundamento de esta ley ha de ser el principio de que la propiedad de las obras de arte no corresponde exclusivamente al autor, sino también a la sociedad, por su participación en la sociedad, por su participación en la producción, por lo cual es ésta una propiedad especial, en la que las facultades del propietario están limitadas por la participación social.*

**3º. La obligación de elaborar un Registro de antigüedades en poder de las Corporaciones Públicas, siendo de carácter voluntario los de propiedad privada:** *Debe crearse un Registro de antigüedades, cuyas oficinas podrán residir en las provincias, pero con un índice central. Todas las obras inscritas en el Registro quedarán sujetas a los efectos de la ley. Se exceptuarán de esta inscripción las obras de autores vivos, las que sus propietarios hayan adquiridos directamente de sus autores y las que tengan menos de cincuenta años de antigüedad. El Estado, Ayuntamientos, Diputaciones, Iglesias, Cabildos y Asociaciones protegidas por el Estado, estarán obligados a inscribir todas sus antigüedades; las obras de particulares se inscribirán voluntariamente o de oficio, pero siempre con su conocimiento. Se presumirá propietario de una obra el que figure como tal en el Registro.*

**4º. El deber de conservación de las antigüedades y su divulgación por parte de los Poderes Públicos.** *El Estado, Ayuntamiento, Diputaciones, Iglesias, Cabildos y Corporaciones o Asociaciones protegidas por el Estado, estarán obligados a conservar sus antigüedades y restaurarlas cuando peligre su conservación. Deberán asimismo exponer los objetos y permitir la consulta de los libros raros, códices y documentos históricos que posean. No podrán enajenar las antigüedades, sino por necesidad acreditada en expediente judicial.*

**5º. Los límites de disposición de los propietarios privados de aquellos bienes que estuvieran inscritos en el Registro:** *Las antigüedades propiedad de particulares inscritas en el Registro no podrán ser destruidas ni modificadas por sus propietarios; las obras de restauración que en ellas se realicen habrán de ser autorizadas y vigiladas por el Estado. Cuando peligrare la conservación de una obra, y su propietario, requerido por la autoridad competente, no realice las obras necesarias para evitar su ruina, podrán ser expropiadas por causa de utilidad pública, deduciéndose de la tasación el coste de la restauración, que*

*realizará el Estado. Los propietarios de las antigüedades inscritas estarán obligados a exponerlas temporalmente en la forma que determine el Reglamento.*

**6º. El derecho de tanteo y retracto por parte del Estado.** *Toda transmisión de obras inscritas en el Registro deberá también ser inscrita; El Estado tendrá el derecho de retracto. Para exportar las antigüedades, será preciso solicitar la autorización de la oficina central del Registro, la cual, en plazo que se fije, ejercitará el derecho de tanteo, o el retracto en su caso, o autorizará la exportación; en este último caso, habrá de pagarse un impuesto proporcional al valor de la obra; si se adquiere la obra por el Estado, se rebajará de la tasación el importe del impuesto. La tasación, en uno y otro caso, se hará, si no hay acuerdo, por peritos y tercero en discordia.*

**7º. La propiedad pública de los bienes descubiertos en las excavaciones arqueológicas.** *Todas las antigüedades que se descubran al practicar excavaciones o demoler edificios, sea en propiedad del Estado o de particulares, serán propiedad del Estado; éste abonará al propietario de la finca y al descubridor el valor material de los objetos según la materia con que estuvieren fabricados. No se podrán practicar excavaciones arqueológicas sin autorización del Estado, que podrá concederla o denegarla, y deberá vigilar los trabajos. Al conceder la autorización, deberá expresarse en cada caso la parte de los objetos encontrados que el que realice la excavación podrá hacer suyos. El dueño del terreno en que se practiquen excavaciones tendrá derecho a indemnización de daños y perjuicios; cuando se juzgue conveniente, podrá ser expropiado por causa de utilidad pública.*

**8º. Un régimen penal sobre infracciones en el deber de conservar los bienes históricos y artísticos.** *Las infracciones de los preceptos de la ley deberán ser castigadas, cuando no estén comprendidas en el Código penal, con penas pecuniarias, proporcionadas al daño causado.*

**9º. Todos los ingresos que el Estado obtenga por virtud de las multas y derecho de exportación,** *juntamente con la cantidad que se consigne en el presupuesto, deberán destinarse a la adquisición de obras y a practicar excavaciones*<sup>2596</sup>.

#### **1.2.4.2. La construcción de un Derecho Público del Patrimonio Monumental en la etapa del Regeneracionismo.**

No cabe duda que la actitud de algunos intelectuales, instituciones culturales y algunos miembros de las Reales Academias de San Fernando y de la Historia, como fueron el caso de Elías Tormo van a llevar a ir delimitando una política intervencionista del Estado, dejando el papel abstencionista que en muchos momentos había tenido en la etapas anteriores. Las continuas enajenaciones fraudulentas o no fraudulentas de bienes artísticos producidas en estos años no van a quedar ajena al propio Estado, por lo que va ir desarrollando una amplia política legislativa poniendo en entredicho la propia naturaleza jurídica del bien que quiere tutelar, tanto en los distintos proyectos que tendría su germen en el año 1900 y que se prolongaría en cuatro ocasiones hasta 1909, culminándose en la promulgación definitiva de una amplia

<sup>2596</sup> Rodríguez Pascual, 1916, p28.

legislación cuyos más importantes exponentes serían la ley de 1911 y su Reglamento de 1912 y la posterior ley de 1915, así como una política de reestructuración de la propia institucionalización administrativa del Patrimonio Monumental, superación de las creadas en la etapa isabelina, a lo que habría que unir a una política de registro de esos bienes, que se proyecta con la elaboración mediante iniciativa pública de la elaboración de Catálogos e Inventarios Monumentales. Sin embargo, la tutela pública seguirá teniendo algunos obstáculos a la hora de legislar una moderna producción normativa como se estaban produciendo

Tramoyers se lamenta de la carencia de una verdadera ley de protección monumental en el comienzo del siglo XX: *Los legisladores españoles no han enfocado bien el objeto principal de una ley defensiva en materia de antigüedades. En este punto estamos por debajo de la ley italiana de 12 de junio de 1902, que puede presentarse como modelo en orden a la prohibición absoluta del libre comercio de objetos artísticos de carácter antiguo o precioso. El autor ha instado la redacción de un sencillo y metódico código de antigüedades, recopilando en él algunos de los preceptos que figuran en la copiosa legislación española, pero trazando normas acomodadas al estado presente del comercio y tráfico de antigüedades entre particulares o entidades jurídicas. Algo va ejecutándose en este sentido, pero no se ha llegado aún a la fórmula de armonía entre los patrocinadores de la vigente libertad y los que estimamos necesario, indispensable y urgente, inspirar la nueva ley en un principio de defensa de lo que en realidad constituye el concepto artístico de la nación, superior al concepto del interés individual, en pugna casi siempre, con el colectivo o nacional*<sup>2597</sup>. A continuación nos da un buen informe sobre la producción normativa desde 1911 hasta 1919, lamentándose en algunos casos de las carencias ya expresadas anteriormente:

*Ley de 7 de julio de 1911 sobre excavaciones artísticas y científicas; reglamento provisional para la aplicación de la citada ley:*

*1º. Real Decreto de 1º de marzo de 1912. Ley inspirada en un verdadero espíritu centralizador y burocrático.*

*2º. Museos provinciales y municipales de Bellas Artes. Real Decreto de 24 de junio de 1913. Reglamento para su aplicación: 18 octubre de 1913. La misión principal es la de recoger las obras de arte de las respectivas localidades y exponerlos al público.*

*3º. Monumentos arquitectónicos y artísticos. Ley de 4 de marzo de 1915. No se ha publicado aún el reglamento. La finalidad obedece al propósito de evitar la destrucción o venta de los edificios particulares previamente incluidos en el Catálogo artístico de España.*

*4º. Reglamento reorganizando las Comisiones Provinciales de Monumentos. Real Decreto de 11 de agosto de 1918. La Ley de Excavaciones y especialmente su Reglamento, hacen poco eficaz el funcionamiento de las Comisiones, cuya vida languidece en la mayor parte de las provincias.*

---

<sup>2597</sup>TRAMOYERES, Luis “Legislación vigente en España sobre antigüedades monumentales y artísticas”, *Archivo de Arte Valenciano*, 1919, pp.103-104.

5°. *Delegaciones Regias provinciales de Bellas Artes. Real Decreto de 10 de octubre de 1919. Organismo creado con plausible propósito, pero falto de vitalidad por no haberse deslindado bien las atribuciones de los Delegados.*

6°. *Legislación eclesiástica concordada. Las disposiciones dictadas por la Iglesia en varias épocas para reglamentar la venta de obras de arte, propias del culto, han sido anuladas por las nuevas normas contenidas en los cánones incorporados al reciente Código de Derecho Canónico, promulgado por la autoridad del Papa Benedicto XV, publicado en Roma el año 1917, y vigente en España. La enajenación ha de ajustarse a lo preceptuado en el canon 1530, pero cumplidas estas obligaciones: 1° Necesidad de la venta y utilidad de la misma para la Iglesia o la piedad; 2°. Justiprecio de la cosa hecha por peritos y consignado por escrito; 3°. Licencia del superior; 4°. La venta será con la oportuna publicidad, no haciéndose la enajenación por precio inferior a la de la tasación. Los Superiores pueden autorizar las ventas cuyo importe sea mayor de 1000 francos, liras o pesetas y no excedan de 30.000. Siendo mayor, la licencia corresponde a la Sede Apostólica*<sup>2598</sup>

## **2. Un nuevo marco administrativo de la tutela pública del Patrimonio Monumental en la España de Alfonso XIII.**

Con la llegada de la Restauración se fue consolidando el aparato administrativo iniciado en la etapa isabelina, pero no sería hasta el reinado de Alfonso XIII cuando se consagraría definitivamente, aunque sin poderse resolver algunas de las carencias que había sido habitual en la administración española durante toda la etapa decimonónica. Un gran número de disposiciones legales serían promulgadas por la Administración Central sobre el patrimonio histórico artístico, entre las que resaltamos las siguientes, articulando los pilares del sistema administrativo tutelar del Patrimonio Monumental en los inicios de la contemporaneidad.

- Los intentos de configurar una Catalogación de los Monumentos Históricos-artísticos, que sería frustrada por la inoperancia de las Comisiones de Monumentos.
- El Real Decreto de 27 de julio de 1913.
- El Reglamento de 1916: El nuevo papel de las Comisiones Provinciales de Monumentos Histórico-Artísticos.

### **2.1. La Comisión General de Bellas Artes y Monumentos.**

La Comisaría General de Bellas Artes constituye el primer ensayo institucional sobre Patrimonio Monumental durante la etapa de Alfonso XIII, regulado por el **Real decreto de 31 de marzo de 1905**, en cuya Exposición de Motivos ya se fundamentaba la necesidad de incorporar en la administración individuos con la suficiente preparación técnica, que en cierta manera había carecido un gran número de miembros de las Comisiones Provinciales de Monumentos: *La riqueza artística de España y el desarrollo y cultivo de las Bellas Artes exigen cuidadosa atención por parte del Gobierno. Para conservar con*

<sup>2598</sup> TRAMOYERES, L, 1919, p.106.

*inteligencia los maravillosos monumentos y las joyas de arte que nuestros antepasados nos legaron; para impulsar el gran movimiento artístico de la Nación en los tiempos modernos y hacer llegar a todas partes el influjo bienhechor del Arte, que ennoblece y levanta el espíritu de los pueblos, necesita el Ministro que suscribe contar con el auxilio de hombres estudiosos y con vocación artística, que le secunden con entusiasmo incompatible con la aridez burocrática, y para ello propone a V.M. la creación de una Comisaría general de Bellas Artes y Monumentos, puramente honorífica. De esta suerte se incorporarán a la Administración personas inteligentes que contribuirán al desenvolvimiento artístico de nuestra Patria.* Para ello se dispondría la creación de una Comisaría general que se llamará de Bellas Artes y Monumentos, bajo la inmediata dependencia del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y como delegación del mismo, con el objeto de procurar la debida conservación y adecuada exposición de las riquezas artísticas de España, y de promover la enseñanza y fomento de las Artes (art.1). El cargo de Comisario general de Bellas Artes y Monumentos será honorífico y gratuito, sin derecho a sueldo o gratificación, y compatible con el desempeño de Cátedra, plaza de profesor o cargo facultativo de escala cerrada, de residencia en Madrid. El nombramiento se hará precisamente por medio de Real decreto (art.2). Las atribuciones que se le otorgaría al Comisario Regio de Bellas Artes y Monumentos serían: 1º) Asesorar al Ministro en los asuntos de su competencia, cumplimentar sus acuerdos y ejecutar sus encargos y comisiones especiales; 2º) Gestionar cuanto entienda conveniente a la conservación de las riquezas artísticas del Estado, proponiendo a los Ministros y Autoridades de todo orden las medidas oportunas; 3º) Excitar el celo de las Autoridades y Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos, proponiéndoles directamente cuantas medidas particulares entienda sean oportunas para la mejor conservación de las obras artísticas de la propiedad de dichas Corporaciones; 4º) Gestionar cerca de las Autoridades eclesiásticas; 5º.)Inspeccionar personalmente las obras de arte conservadas en todos los establecimientos públicos, visitándolos oficialmente, previo el conocimiento, y en caso necesario, el consentimiento de las Autoridades o funcionarios encargados de su conservación y custodia. El consentimiento previo no será necesario en las visitas a los Museos de todas clases, Monumentos Nacionales y Escuelas de Arte dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, en los cuales tendrá el carácter y atribuciones de Inspector y de Visitador especial, como Delegado del Ministro, al que propondrá las medidas que crea necesarias para corregir cualquier deficiencia que observe; 6º) Comunicarse oficialmente con las Reales Academias de Madrid y de provincias, en especial con las de Bellas Artes, con las Comisiones Central y organizadora de las provincias de Monumentos y con las Juntas facultativas del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y de Construcciones Civiles, dependientes del Ministerio; 7º) Reunir, asistir y presidir las Juntas provinciales de Monumentos; 8º) Promover cuanto tienda al mejor conocimiento, estudio y aprecio de la riqueza artística y monumental de la Nación, excitando el celo y



patriotismo de los particulares y de las Asociaciones particulares y 9º) Proponer al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes la subdelegación, con carácter temporal o permanente, de algunas atribuciones de las anteriores, en persona de reconocido celo y entusiasmo que en determinada provincia, comarca o población pueda contribuir a los fines de la Comisaría, ostentando la representación de ella. El nombramiento de Subdelegado (o Subcomisario) se hará de Real Orden.

La creación de una Comisaría Regia contaría con la oposición de las Comisiones Provinciales de Monumentos en cuanto a las atribuciones que les correspondían en la tutela del Patrimonio Monumental, por lo que se promulgaría **la Real orden de 7 de abril de 1905** se dispondría que la Comisión general de Bellas Artes y Monumentos formen parte integrante del Ministerio de Instrucción Pública, precisando que *su misión en nada aminoran ni merma las facultades y atribuciones que por virtud de sus estatutos competen a las Reales Academias, ni aquellas otras que por las disposiciones vigentes tienen encomendadas las Comisiones centrales y provinciales de Monumentos*. De igual manera las atribuciones de inspección atribuidas al Comisario Regio podían contraponerse con las otorgadas a las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia, por lo que sería promulgada la **Real orden de 25 de mayo de 1905** en la que nuevamente se perfilaba las facultades del Comisario. De esta manera se establecía que la Comisaría general de Bellas Artes y Monumentos, en la dependencia y por delegación, es el Centro Superior directivo del ramo de Bellas Artes y Monumentos, ostentando la representación inmediata de la autoridad del Ministro, teniendo a su cargo el despacho de los asuntos en que entienda, bajo su dependencia, la Sección de Bellas Artes y el Negociado de Construcciones civiles (art.1). Entre sus atribuciones estarían: 1º) Fiscalizar por sí, como Delegado del Ministro, los actos de la Administración, encomendados a las Secciones y Negociados de su dependencia (art.2.1); 2º) Poner en conocimiento del Ministro, con su dictamen, los casos de infracción de ley, instrucción o reglamento que le participen las demás Autoridades, o los que observe en el ejercicio de sus funciones (art.2.2); 3º) Resolver las dudas y reglamentos que se promuevan con motivo de la ejecución de los servicios que están a su cargo (art.2.3); 4º) Proponer las mejoras y variaciones que juzgue necesarias en el ramo de Bellas Artes y Monumentos (art.2.4); 5º) Redactar los proyectos de leyes, reglamentos, instrucciones, Reales decretos y Reales órdenes de carácter especial del ramo que el Ministro le encomiende (art.2.5); 6º) Informar los expedientes en que el Ministro así lo acuerde y proponer la aprobación de presupuestos de gastos, cuentas y expedición de libramientos (art.2.6) y 7º) Dictar las oportunas órdenes dentro de sus atribuciones, haciendo uso de la delegación del Ministro (art.2.7). Se regulaba el cargo de la Subsecretaría, que asumiría las atribuciones comprendidas por el Delegado, especialmente las comprendidas en el capítulo 2º del reglamento del régimen interior del Ministerio de 1º de junio de 1900, y especialmente la comprendida en los

artículos 4º y 5º y números 7, 11, 12, 14 y 15 del 6º (art.3). En ausencia y enfermedades del Comisario general, sería sustituido por el Subsecretario, en el despacho y firma de los expedientes del ramo (art.4). Las Secciones y Negociados de Bellas Artes y Monumentos o Construcciones Civiles quedarían al Ministro y al Comisario General (art.5), solicitándose el dictamen de las Reales Academia por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en cuantos asuntos se señalaba de *calidad*, que quedara patente en la legislación que estaba vigente (art.6). El régimen jurídico se completaría con la asignación presupuestaria que se le concedería al Comisario, calificado de abono, comprendiéndose todos los gastos justificados en las visitas de inspección a Museos y Monumentos y obras artísticas de provincias, quedando con cargo las correspondientes partidas del presupuesto, previa la aprobación de la cuenta, mediante Real Orden (art.7).

Las críticas de la nueva institución no se hicieron esperar como aparece reflejado en el artículo aparecido en la revista *La Alhambra* el 15 de abril de 1905, al achacar la mala gestión institucional que conllevaba su propia creación: *Este Comisario regio asesorará al Ministro, cumplimentará sus acuerdos y ejecutará sus encargos y comisiones especiales; gestionará lo conveniente a la conservación de las riquezas artísticas del Estado; excitará el celo de las autoridades y corporaciones populares, proponiéndoles las medidas oportunas para la conservación de las obras artísticas que aquellas posean; gestionará cerca de las autoridades eclesiásticas la conservación y exposición de las riquezas artísticas; inspeccionará las obras de arte y propondrá las medidas para corregir las deficiencias que se notan; ha de comunicarse oficialmente con las Reales Academias y Comisiones de Monumentos de Madrid y provincias, y juntas facultativas del Cuerpo de Archiveros, bibliotecarios y arqueólogos y de Construcciones Civiles; reunirá, asistirá y presidirá las juntas provinciales de Monumentos; promoverá el estudio y aprecio de las riquezas artísticas y propondrá subdelegaciones de algunas de sus atribuciones con carácter temporal o permanente, en determinada provincia, comarca o población. No sabemos qué pensarán de este Real decreto las Academias de Bellas Artes y las Comisiones de Monumentos, pero a la vista salta, desde luego, que importa mucho más a la debida conservación y adecuada exposición de las riquezas artísticas de España, que se reorganizaran de modo digno y conveniente esas Academias y Comisiones, y que unificando la legislación referente a artes y haciendo posible su aplicación y obediencia, viniéramos a saber para qué sirven esas Corporaciones y las leyes escritas (...) ¡Cosas de España!, hay que decir siempre. Que nuestros monumentos se hundan; que nuestras riquezas artísticas se vendan; que nadie hace las Comisiones de monumentos, ni de las Academias (...) pues se nombra un Comisario regio y no hay nada más que pensar, hacer, ni decir*<sup>2599</sup>.

---

<sup>2599</sup> El Bachiller Solo, "La Comisaría Regia de Bellas Artes y Monumentos", *La Alhambra, Revista quincenal de Artes y Letras*, Año VIII, 15 de abril de 1905, Núm.170, pp.145-146.

## 2.2. La inspección de obra de arte.

Un nuevo paso en el camino de un sistema centralizador administrativo de la tutela pública del Patrimonio Monumental fue la creación del cargo de Inspector de Obra de Arte por Real decreto de 8 de julio de 1910, nacido como así consta en su Exposición de Motivos por la necesidad de atender el caudal artístico que *exigen la aplicación constante de la actividad y un trabajo asiduo de observación y estudio incompatibles con toda otra atención*, por lo que hasta este momento no se podía atender el amplio número de *monumentos nacionales de relevante mérito a cargo del servicio de Construcciones Civiles, y tan numerosas las joyas artísticas(...)* por lo que era necesario unir a la acción directiva y ordenadora el auxilio de una inspección inmediata y directa, sin cuyo complemento es ineficaz aquella acción. La Inspección general administrativa de Monumentos artísticos e históricos, cuyo titular tendría la categoría de Jefe superior de Administración civil, sería creado en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, bajo la inmediata dependencia del Ministro y del Subsecretario (art.1º), y entre sus atribuciones estarían serían: 1º. Asesorar al Ministro y al Subsecretario; 2º. Proponer las medidas oportunas que debían adoptarse para la conservación y cuidado de los Monumentos artísticos de España; 3º. Excitar el celo de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos para que contribuyeran con su esfuerzo y auxilio a la conservación de los Monumentos; 4º. Vigilar la acción y cumplimiento de las disposiciones que están encomendadas a los conservadores provinciales de Monumentos, nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública. La creación del nuevo cargo administrativo sería criticado por el diputado Avilés, ya que en su opinión, suscitaba entre sus atribuciones algunas competencias no administrativas: (...) *a mi me parece excelente, pero algunos amigos y compañeros míos entendían que, acaso en las disposiciones de este decreto, se concedían algunas facultades a esta Inspección que pudiera no ser del todo administrativas. Yo opino que lo son, porque así lo declara el preámbulo del decreto, preámbulo que indica bien la razón, el fundamento de haberlo dictado, pero por la forma de algunas de estas disposiciones, especialmente la segunda, quinta y sexta de las atribuciones concedidas a esta Inspección, pudiera parecer que traspasan los límites administrativos (...)*. La réplica del Ministro de Instrucción Pública, Bure defendía el carácter administrativo del cargo y el respeto por la acción que hasta este momento había desempeñado la Real Academia de San Fernando: *Se trata de una inspección puramente administrativa, que en nada roza las delicadísimas funciones de un cuerpo tan insigne como la Academia de Bellas Artes de San Fernando, funciones que tiene reconocidas desde ha largo tiempo. Esas funciones no solo las acepto, sino que desde luego mi respeto absoluto, y pueda estar cierto S.S. de que en nada que se refiere la parte artística, ha de tener la nueva Inspección general de monumentos rivalidad alguna con la Academia, ni otra clase de autoridades artísticas. El carácter de esta Inspección es puramente administrativo, y por ello no sólo se refiere a los monumentos artísticos, sino también a las construcciones civiles (...)*.

### 2.3. El Real Decreto de 10 de octubre de 1919: La creación de los Delegados Regios.

La aparición del Delegado Regio a raíz del Real Decreto de 10 de octubre de 1919 se entiende como una alternativa a las Comisiones Provinciales. En la Exposición de Motivos se mencionaba la necesidad una vez más de la creación de un aparato administrativo debido a la pérdida patrimonial que todavía se estaba dando en esta etapa, y especialmente la elaboración de un catálogo: *Estima el Ministro que suscribe, que ha llegado el momento de dar unidad a muchas disposiciones dispersas, al dictar otras de más positiva eficacia y de lograr, en fin, una legislación definida por medio de un proyecto de Ley de protección a las artes (...) No pretende el Ministro que suscribe dar cauce burocrático a estos anhelos; pretende, por el contrario, buscar para darles forma, la colaboración de un puñado de hombres de buena voluntad, de espíritus cultivados no sólo por el estudio y la contemplación de la belleza, sino por el imperio de ese mismo amor que ha de despertar en el alma de las multitudes. No se ve con este Decreto a la creación de oficinas ni centros, sino sólo a dar oficial representación, realidad como organismos vivos de la obra que se emprenda, a quienes por sus actos anteriores, por su prueba de amor a la cultura, al arte y a la patria, pueden llevar toda la eficacia de su colaboración entusiasta a la obra futura (...) Quienes realizaron trabajos aislados por su solo esfuerzo, aquellos que llevaron a cabo en cada provincia la oscura labor de ir clasificando las obras artísticas, quienes tengan vocación y estén preparadas para realizarlas, serán nombrados Delegados provinciales de Bellas Artes, sin otra recompensa que la inmediata de dar eficacia a sus trabajos y la más lejana, pero más pura de haber contribuido a una obra protectora, la de la conservación de la riqueza artística española*<sup>2600</sup>. Las obligaciones del nuevo cargo quedan recogidas en el artículo 2º: 1º. Realizar trabajos necesarios para la formación del inventario artístico de la provincia; 2º. Llevar a efecto cuantas investigaciones sean compatibles con los derechos reconocidos por la legislación y llevan al conocimiento de las modificaciones, deterioros, restauraciones mal entendidas, enajenaciones y exportaciones que pueden ser objeto la obra de arte; 3º. Procurar por todo los medios posibles cultivar el espíritu artístico, y el amor a las manifestaciones de la cultura en todo los ciudadanos, dando conferencias, provocando visitas colectivas, publicando artículos en la prensa, buscando la colaboración de entidades y particulares. Los Delegados Regios tendrían la consideración de jefes superiores de la administración civil, aunque sin ningún tipo de remuneración económica. La elaboración de un inventario nuevamente se convierte en uno de los objetivos primordiales de la Administración, recogándose todo tipo de bienes: 3. *El inventario deberá ser lo más completo posible, no limitándose a los monumentos, sino también a los cuadros, esculturas, tallas, libros y manuscritos, restos prehistóricos y primitivos y cuantas manifestaciones artísticas existen en las localidades y en los edificios del Estado, de Corporaciones y particulares.* Al mismo se plasma nuevamente en la legislación española las controversias con los derechos de los propietarios: 4. *Este inventario no tendrá otra fuerza que la de servir de base de conocimiento, y por tanto, no significa merma de ninguno de los derechos que hoy*

---

<sup>2600</sup> ORDIERES, Isabel, 1995, p.56.

*tengan los poseedores de las obras que figuren relacionadas. La centralización administrativa es un hecho, al ser presentado sus trabajos a la Dirección General de Bellas Artes: 5. Los trabajos del inventario podrán verificarse parcialmente y ser enviados a la Dirección General de Bellas Artes conforme vaya realizándose(...).* Con la promulgación del R.D. de 17 de octubre de 1919, fueran nombrados los Delegados Regios de gran parte de las provincias, entre los que se encontraba personalidades de la talla de Elías Tormo (Madrid), Francisco de Paula Valladar (Madrid), etc. Sin embargo, la nueva figura no tuvo en la práctica un papel significativo debido a la falta de presupuesto, como el propio Torres Balbas se refiere, al considerarlo *un organismo creado con plausible propósito, pero falto de vitalidad por no haberse deslindado bien las atribuciones de los delegados*<sup>2601</sup>.

#### **2.4. El Patrimonio Monumental como Patrimonio Turístico en la España de los primeros decenios del siglo XX: El Delegado Regio de Turismo.**

En las décadas finales del siglo XIX y principio del siglo XX la impronta del turismo se extiende a un mayor número de población entre los clases altas y medias de la sociedad, generando beneficios económicos, especialmente en algunas ciudades cuyo patrimonio histórico y artístico empieza a hacer admirado por sus visitantes, como se puede apreciar en Granada, que hacia 1870 ya acuden dos o tres mil personas para visitar la Alhambra, produciendo una renta superior a los cien mil duros, o en el caso de Toledo, que siguiendo un informe publicado en 1927 por Santiago Camarasa, se conoce la evolución ascendente de turistas, cuya cifra antes de 1910 no llegaban al millar, subiendo a 4.000 en 1911 y llegando a 40.000 en 1914, repuntando después de la crisis de la I Guerra Mundial, a 80.000 en 1924 y 116.000 en 1926<sup>2602</sup>. La participación de España en el IV Congreso Internacional de Turismo celebrado en Lisboa a comienzo de 1911 sería el detonante final de crear un organismo que coordinara todos los asuntos relacionados con el turismo. Ya en Portugal había nacido en abril de 1910 la Office National de Tourisme, al mismo tiempo que algunas instituciones catalanas como la Societat D'Atracció de Forasters de Barcelona había propuesto la creación de un organismo tutelar de la política del turismo. Por fin, con el Real decreto de 19 de junio de 1911 siendo Presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas y Ministro de Fomento, Rafael Gasset se crea la Comisión Regia de Turismo<sup>2603</sup>. En la Exposición de Motivos se reafirmaba la situación de desamparo que había tenido el Patrimonio Monumental en España: (...) *se impone la necesidad de que nuestra Patria preste la debida atención a los*

<sup>2601</sup> TORRES BALBAS, L., p.104.

<sup>2602</sup> DE LA CALLE VAQUERO, Manuel, *La ciudad histórica como destino turístico*, Ariel, Barcelona, 2ª edición 2006.

<sup>2603</sup> CAL, Rosa "La propaganda del turismo en España. Primeras organizaciones" *Historia y Comunicación Social*, 2, Madrid, Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, 1997.



*tesoros de arte que heredó de la antigüedad, dándoles el adecuado marco dentro de las exigencias de la vida moderna. Un poco desamparados de la tutela oficial estuvieron estos tesoros hasta el día, porque otros problemas más imperiosos, desde el punto de vista económico y político, reclamaban el cuidado de los Gobiernos; pero el andar del tiempo nos ha traído a la necesidad de velar por aquel patrimonio de la vida espiritual española, que si nos pertenece en cierta medida, es también del dominio mundial, ya que el arte está, por designio divino, sobre todas las materialidades y los exclusivismos de nacionalidad y de fronteras.* De esta manera sería creada en la Presidencia del Consejo de Ministros una Comisaría Regia encargada de procurar el desarrollo del turismo y la divulgación de la cultura artística popular (art.1), cuyas atribuciones serían: 1º) Proponer las medidas conducentes a la vulgarización de los conocimientos elementales del arte y el aumento de la cultura artística colectiva; 2º) Vigilar la conservación eficaz y procurar la exhibición adecuada de la España artística, monumental y pintoresca; 3º) Promover y sostener las relaciones internacionales que las necesidades de la época actual exigen en materias artísticas.; 4º) Facilitar el conocimiento y el estudio de España, procurando la comodidad de los alojamientos, la seguridad y rapidez de las comunicaciones y el acceso a las bellezas naturales y artísticas de nuestra Patria, añadiendo de manera emotivo las relaciones con ultramar, por lo que se intentaría desarrollar, *por los métodos más eficaces, las relaciones espirituales, sociales y económicas que enlazan América con España* (art.2.5). El Comisario Regio sería designado libremente por el Gobierno, adquiriendo la categoría de Jefe superior de Administración civil, aunque desempeñando gratuitamente su cargo, teniendo a sus órdenes dos funcionarios de cada uno de los Ministerios de Estado, de Gobernación, Fomento e Instrucción Pública, que prestarían sus servicios en comisión (art.3). Con órgano auxiliar al Comisario Regio se constituirá una Junta Superior, cuyos individuos serán nombrados por la Presidencia del Consejo de Ministros (art.4). Como apunta Rosa Cal, la Comisaría Regia volvía a ser un organismo con poca capacidad operativa ya que, al principio, no se le asignaba presupuesto alguno, ni tampoco se establecían formas de subvención a los organismos privados (...). Sin embargo, al mes siguiente de su creación comenzaría sus actividades canalizándose a través de los gobernadores civiles, para lo que la Presidencia del Consejo de Ministros enviaría una circular a éstos anunciándoles la creación de la Comisaría Regia e instándoles a que colaborasen: *El carácter patriótico, social y económico de la ardua labor que encomienda el R.D. de 19 de junio último a la Comisaría Regia encargada de procurar el desarrollo del turismo y la divulgación de la cultura artística popular, exige el apoyo moral de todos los españoles y el material de muchos, especialmente de V.I. por relacionarse íntimamente con las funciones de su cargo la mayoría de las reformas que con este motivo se intentan*<sup>2604</sup>. Sería sustituido por el Patronato Nacional de Turismo en la etapa del general Primo de Rivera.

---

<sup>2604</sup> CAL, Rosa, 1997, pp.132-133.

## 2.5. La acción proteccionista de la Mancomunidad de Cataluña: Una administración vanguardista del Patrimonio Monumental en el marco hispano.

### 2.5.1. El debate institucional sobre la conservación de las pinturas murales de las iglesias románicas de Cataluña.

Elías Tormo en la Sesión del Senado de 21 de julio de 1922 denunciaba el arranque que se estaba produciendo de las pinturas murales de las ermitas e iglesias medievales castellanas y catalanas: *Ya en este año, hace pocos meses, aparecieron vendidas las pinturas murales de las ermitas y de las iglesias de la montaña catalana, y un muy distinguido artista italiano, Stefaneni, que había adquirido tal pericia en las operaciones necesarias para arrancarlas de un golpe, sobre un lienzo preparado, para después aplicarlo por el lado opuesto definitivamente a otro lienzo y convertir las pinturas murales como en cuadros, habiéndose interesado elementos probablemente yanquis (...) resultó el problema que parecía que estaban vendida todas las pinturas murales del siglo XII, aparentemente tan arruinadas y tan perdidas de la montaña catalana. Se han dado en España leyes en los últimos años que permiten, cuando hay una gran energía, defender el tesoro moral de la Patria, que en gran parte, incide en monumentos como los aludidos, y cuando hay además despierta una Administración, con esa legislación puede bastar para la defensa. Interviniendo los elementos directores del Museo de Barcelona, solicitando la ayuda de las autoridades civiles y militares y haciendo intervenir a los señores prelados, sintiendo amor a las históricas riquezas de Cataluña, se llegó a una transacción, que ha sido la siguiente: tuvieron que consentir que las pinturas de Mur, de Santa María de Mur, salieran de España y fueran a enriquecer alguna colección o Museo de los Estados Unidos; pero decidida Barcelona y sus instituciones de cultura a que el caso no se repitiera, llegaron a una transacción patriótica que yo, artísticamente, no debo del todo calificar; por lo cual, Barcelona, mediante un desembolso de 500.000 pesetas y amparándose en nuestra legislación protectora de monumentos artísticos y sustituyéndose en los contratos, mediante la intervención de los prelados y otras autoridades, a aquellos que habían hecho los contratos subrepticios para arrancar las pinturas murales y llevárselas (...), Barcelona ha conseguido que todas las grandes pinturas (hay ábsides, como la hornacina del trono, verdaderamente enorme, y además están las de las paredes), todas las pinturas (...) de la montaña catalana, principalmente las más bellas, las más ocultas, San Clemente de Tahull, Santa María de Boil y Santa María de Aneu, en la parte más alta del Pirineo, ya no en el valle de Arán (...) todas estas pinturas se hayan podido llevar al Museo de Barcelona, y en el Museo de Barcelona han constituido una estupenda sala, única en el mundo hoy, en que se muestran todas estas espléndidas pinturas (...) Todos esos esfuerzos colectivos, toda esa pasión patriótica que ponen los catalanes en sus cosas y la intervención de los Prelados que han sentido el espíritu de sus glorias catalanas, han dado este resultado (...) Esto es lo que ha hecho en Barcelona (...) apoyándose en la legislación que aquí hemos hecho para la defensa de los monumentos artísticos, con aquel derecho de tanteo que tiene el Estado, que puede delegar y que muchas veces delega en Barcelona<sup>2605</sup>. La delegación del derecho de tanteo del Estado en las instituciones públicas catalanas sería defendida por el senador: Señores*

<sup>2605</sup> Sesión de las Cortes. Senado. Sesión del 21 de julio de 1922, Núm.31, pp.1961.

*Senadores, cuando algunas veces os alarmáis de esas ideas que suscita en espíritu de conciliación con Cataluña, de que el Estado delegue, por ejemplo, en la Mancomunidad determinadas atribuciones, como las necesarias para la conservación de carreteras y otras cosas, tened presente que es porque el Estado español no tiene elementos, no tiene más remedio que estar continuamente este género de delegaciones en Barcelona, para que allí utilicen el derecho de tanteo que el Estado corresponde, y que es un derecho que puede delegar. Por ejemplo, en este momento la catedral de Lérida acaba de vender espléndidas ropas de los siglos XIII y XIV en cantidad respecto de la cual el Estado español ha tenido que confesar que no podría pensar siquiera en abonar; pero se ha presentado inmediatamente el Museo de Barcelona y ha dicho "yo tengo esta cantidad" y ha tenido el Estado español que delegar en el Museo de Barcelona el derecho de tanteo que, ejercitado por Barcelona, ha hecho que se vaya enriqueciendo un Museo que hace pocos años no existía*<sup>2606</sup>.

### **2.5.2. Un ensayo institucional de la tutela del Patrimonio Monumental en Cataluña.**

Durante el periodo de la Restauración, Cataluña vivió un importante capítulo de protección patrimonial desde la iniciativa privada, desde el surgimiento de las Sociedades de Excursionistas, que contaron con una amplia participación de la ciudadanía, contando con un gran número de eruditos. A principios del siglo XX, la Administración Pública comenzó a tener una mayor sensibilización patrimonial. Ya en 1907, un grupo de jóvenes fundaron el *Institut d'Estudis Catalans*, bajo el patrocinio de la Diputación de Barcelona<sup>2607</sup>. El mismo año bajo el impulso de Puig y Cadafalch y Josep Pijoan se crearía el IEC, en cuyo seno nacería la Sesión Histórica-Arqueológica, erigiéndose como centro de investigación científica desvinculada de las instituciones culturales estatales, teniendo como objetivo primordial la organización de la investigación científica. En 1914, cambiaría la situación política con la constitución de la Mancomunitat, siendo su presidente Enrique Prat de la Riba (1870-1917), a su vez presidente de la Diputación de Barcelona, quien planteó una intensa política cultural, respaldando especialmente la gestión del Institut d'Estudis Catalans, que poco antes de constituirse la Mancomunitat había redactado su Sección Histórico-Arqueológica una memoria sobre la conservación y catalogación de los Monumentos, que sería entregada el 30 de abril de 1914, en que se exponían las preocupaciones proteccionistas del momento: Cada día es mayor la gran atención de los estados en lo que se refiere a la conservación de su patrimonio artístico. Importantes organismos administrativos existen exclusivamente dedicados a este objeto; numerosas leyes han sido promulgadas para determinar los principios de actuación y fijar procedimientos; grandes cantidades son consignadas en presupuestos para proteger el arte del pasado. Al afinarse las civilizaciones, crece el interés por mantener en buen estado las

---

<sup>2606</sup> Sesión de las Cortes. Senado. Sesión del 21 de julio de 1922, Núm.31, p.1962.

<sup>2607</sup> LACUESTA, Raquel (Coord.) *Diputación de Barcelona: setenta años de catalogación y conservación de monumentos*. Diputación de Barcelona, 1985, pp.9-10.

obras artísticas y evitar la exportación. Al principio, sólo se vigilaban oficialmente las producciones famosas: grandes monumentos arquitectónicos, pinturas y esculturas de mérito extraordinario. Hoy día, todo lo que tiene un valor artístico, por humilde que sea, es protegido. Al mismo tiempo también se fundaría el *Servei d'Investigacions Arqueològiques* hacia 1915, cuyo objetivo fundamental sería *la organización sistemática de la Prehistoria y la Arqueología de la Edad Antigua en Cataluña y de todos aquellos lugares en los que pudieran encontrarse elementos que ayudasen a solucionar los problemas arqueológicos de Cataluña*. Entre los programas de actuaciones se encontraría la excavación de los yacimientos catalanes, la vigilancia de los hallazgos casuales, creación de una base de datos sobre el material existente en los museos y colecciones particulares de Cataluña, y su exposición en el Museo de Barcelona<sup>2608</sup>. Como apuntan Francisco Gracia Alonso y Jordi Cortadella se trataba del primer servicio arqueológico técnico creado en España, personal administrativo y de restauración, una eficaz red de colaboradores territoriales, teniendo en su haber un amplio número de excavaciones arqueológicas en Cataluña. Miguel Angel López Trujillo apunta como el Servi fue un sólido organismo científico, que más allá de satisfacer inquietudes nacionalistas revolucionó la organización del patrimonio histórico español, al ser la primera entidad de la administración pública delicadamente exclusivamente a su salvaguarda, al contar con el suficiente poder ejecutivo para desarrollar tareas de investigación, intervenciones y divulgación, al mismo tiempo que revolucionaría la manera de entender la inventarización de los monumentos<sup>2609</sup>. Con la proclamación de la Dictadura de Primo de Rivera al ser disuelto por la Mancomunitat, en 1925 el SIA sería incorporado a la Diputación de Barcelona, y ya a finales de 1926 pasaría a depender de la Junta de Museos de Barcelona, recuperando posteriormente en la II República su actividad<sup>2610</sup>.

## 2.6. La protección de las antigüedades en el Protectorado de Marruecos.

Desde la celebración de la Conferencia de Algeciras en 1906, por la que el territorio marroquí pasaba a ser administrado por Francia y España, se comenzó a definir una política institucional referente a la protección del Patrimonio Monumental en estos territorios. Al igual que en los territorios peninsulares, un gran número de piezas arqueológicas y artísticas serían vendidas a coleccionistas en Tanger, pertenecientes a ruinas romanas como fue el caso de Volúbilis. La primera normativa lo encontramos en un Dahir (Real Orden) aprobado el 13 de agosto de 1913, sobre la conservación de los

<sup>2608</sup> GRACIA ALONSO, Francisco; CORTADELLA, Jordi *La institucionalización de la arqueología en Cataluña: El Server D'Investigacions Arqueològiques del Institut D'Estudis Catalans* en DEAMOS, María Belén; BELTRAN FORTES, José (editores) *Las instituciones en el origen y desarrollo de la arqueología en España. Spal Monografías*, X. Universidad de Sevilla, 2007, pp.257 y ss.

<sup>2609</sup> LOPEZ TRUJILLO, Miguel Angel, 2006, pp.330-333.

<sup>2610</sup> GRACIA ALONSO, Francisco; CORTADELLA, Jordi, 2007, pp.275-284.

monumentos y objetos artísticos e históricos, por el que en principio la protección y recuperación del patrimonio se encargaba la administración marroquí tutelada, y no las propias autoridades españolas. En esta disposición normativa se establecía que estaban bajo protección *todo objeto de arte o de antigüedad, como por ejemplo estatuas, ánforas, columnas, piezas de cerámica, mosaicos, maderas labradas, pinturas, inscripciones históricas y, en general, cuantos tengan un carácter artístico o histórica, quedando prohibida su destrucción, traslado de lugar y su venta con destino al extranjero, salvo autorización especial*. Sería en 1916 cuando se crea a instancia de la Real Academia de la Historia, una Junta Superior de Historia y de Geografía de Marruecos, entidad que estaría adscrita al Ministerio de Gobernación, que entre sus atribuciones y deberes tendría trazar el plan general de exploración geográfica y arqueológica y de investigaciones y estudios históricos, una intención que como apunta cabía tildar cuando menos de ambiciosa para la época y los medios existentes<sup>2611</sup>. A esta disposición española, se uniría la emanada de la marroquí, por lo que la Oficina del Jalifa, representante del sultán en el Protectorado emitiría el 22 de abril de 1919 un Decreto Vizirial por el que se creaba la Junta Superior de Monumentos Históricos y Artísticos de Marruecos, que asumió las mismas competencias que la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades tenía desde 1912 en España, a las que se unirían como derivación de la misma, la creación de Juntas Locales en cada una de las ciudades del Protectorado como serían Tetuán, Acila, Larache y Alcazarquivir<sup>2612</sup>. Ya en la etapa del Directorio Militar, se promulgó el Real Decreto de 23 de marzo de 1927 por el que se creaba la Junta de Investigaciones Científicas de Marruecos y Colonias, que incluiría en su ámbito de acción a la primitiva Junta creada por el Real Decreto de 1916.

### **3. Los proyectos de Ley de exportación de bienes históricos y artísticos: un inicio frustrado a los límites del carácter absoluto de la propiedad privada de los bienes de interés histórico y artístico.**

A principios del siglo XX se va a producir un hecho importante en la evolución legislativa del Patrimonio Monumental español: la presentación a las Cortes de una serie de proyectos de ley sobre exportación de obras de arte, marcado primordialmente por la limitación del propietario de los mismos, fueran Corporaciones o particulares, significando de esta manera en apariencia la delimitación definitiva del papel tutelar del Estado y su intervención ilimitada a la hora de conservar y proteger todo tipo de bienes, independientemente de quien fuera el propietario. No cabe duda que de haber

---

<sup>2611</sup> PARODI ALVAREZ, Manuel J. "Notas sobre la organización administrativa de las estructuras de gestión del Patrimonio Arqueológico en el Marruecos Septentrional durante el Protectorado (1912-1936)", *Harakleion*, 2, 2009, pp.120-121.

<sup>2612</sup> GOZALBES CRAVIOTO, Enrique *Los españoles y las antigüedades de Marruecos: De Ali Bey el Abbasi al inicio del Protectorado (1800-1936)*, en BELTRAN, José; HABIBI, Mohammed (ed.), Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008, pp.76-80.



salido adelante estos proyectos nos hubiéramos encontrado con uno de los capítulos más significativos del ordenamiento jurídico español, en cuanto se estaba irrumpiendo definitivamente una concepción social de la propiedad, que se proyectaba en la conciencia pública del Patrimonio Monumental digno de proteger. Desgraciadamente se quedaron en meros proyectos que no por ello no dejar de ser primordiales su análisis ya que se convierten en claros antecedentes de las posteriores disposiciones legales sobre el Patrimonio Monumental en España, los cuales recogemos cronológicamente:

La interpelación del senador Casa Vieja en el Senado sobre la necesidad de regular una ley sobre exportación de obras de arte siguiendo el modelo de la ley italiana de 1902 (1903).

El proyecto de ley de 1904 de exportación de obras de arte de Domínguez Pascual, provocado por los expolios de las obras de El Greco de la Catedral de Valladolid.

Un nuevo proyecto de Ley de exportación de obras de arte: El proyecto del Conde de Casa-Valencia de 1905-1906.

Proyecto de Real decreto de 22 de enero de 1908: Rodríguez San Pedro.

### **3.1. La interpelación del senador Casa Vieja en el Senado sobre la necesidad de regular una ley sobre exportación de obras de arte siguiendo el modelo de la ley italiana de 1902 (1903).**

Las dificultades a la hora de presentar un proyecto de ley sobre exportación de arte quedan plasmadas en el debate producido en el Senado entre Casa Vieja y el entonces Ministro de Instrucción Pública, Allendesalazari, producido el 23 de mayo de 1903, donde una vez más se produce una controversia entre dos maneras de entender la tutela del Patrimonio Monumental, la intervencionista, en la que se postulaba la potestad del Estado con el respeto al derecho de la propiedad del dueño del bien a tutelar, como fue el caso del diputado Casa Vieja, y la defendida por los sectores más conservadores, que seguían mostrándose reacio a la intervención pública en un bien privado. Desde los sectores intervencionistas, comenzaría a defenderse el modelo que se había ido delimitando desde la promulgación de la Ley de 1902, donde se mostraba un claro equilibrio entre la potestad pública y el derecho de la propiedad privada, limitándolo especialmente en el ámbito de la exportación, subrayada por la interpelación de Casa Vieja dirige al Congreso: *Dirijo mi ruego al Sr. Ministro de Instrucción Pública para evitar que salgan de España la multitud de preciosidades artísticas de todo género que tenemos, y que hacen de nuestro país uno de los más interesantes que existen en el mundo para los aficionados a obras artísticas, lo mismo en pintura que en arquitectura. En Italia, de donde se habían sacado muchos objetos artísticos, pues tiene también grandes riquezas, lo mismo en cuadros que en escultura y arquitectura, no hace mucho se aprobó una ley prohibiendo que de aquel reino salieran los objetos artísticos del país, y mi ruego es que se haga lo mismo en España (...)Yo espero que el Sr. Ministro de Instrucción Pública, y a ese se refiere mi petición, tendrá la bondad de presentar un*

*proyecto, que permitiendo que los particulares dispongan de los objetos artísticos que les pertenecen, prohíba, sin embargo, que salgan de nuestro país para ser llevados al extranjero. El derecho de retracto por parte del Estado, que había aparecido en la legislación italiana como algo novedoso, sería cuestionado por el Ministro de Instrucción Pública, como réplica a la intervención de Casas Vieja: y tomando por base la ley italiana a que S.S. ha hecho referencia, se fijaban las condiciones que, tratándose objetos arqueológicos y de riqueza artística, pudiera tener la acción del Estado en una especie de retracto para adquirir en el interior del país dichos objetos y prohibir exportarlos (...) creo que la opinión en España no está suficientemente preparada para que una ley de este género tuviera éxito (...) un proyecto de ley en estas condiciones como el que pretende el Sr. García Alix, opino no tendría éxito, porque esta clase de proyecto daría lugar a un debate más propio de las Academias que de los Cuerpos Colegisladores, y el Sr. Conde de Casa-Valencia comprenderá, con la buena fe con que siempre discute, que será mejor no presentarlo a las Cortes<sup>2613</sup>. Unos meses después el senador Conde-Valencia reiteraría el 6 de noviembre de 1905 la petición de formular un proyecto de ley: Todos los Sres. Senadores saben que en Italia los particulares tienen el derecho de vender las obras de escultura y pinturas de sus pertenencia, pero con la condición, que la ley les impone, de que no han de salir del país, no han de ser exportadas al extranjero, a fin de que no disminuya en manera alguna la colección de preciosos objetos artísticos que allí existen. Como esa disposición me ha parecido muy acertada, hace algunos meses rogué al Sr. Ministro de Instrucción Pública que se adoptará una disposición igual. El Sr. García Alix, que lo era entonces, contestó que estaba completamente conforme con mi opinión, y a los pocos días trajo un proyecto de ley sobre esta materia: pasó a las Secciones, se nombró comisión, pero casi inmediatamente se suspendieron las sesiones, y la Comisión nombrada no pudo dar dictamen. Mi ruego al Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes consiste en que se sirva presentar un proyecto de ley para que los españoles puedan vender los objetos de arte que les pertenezcan, pero con la condición de que no han de salir de España y, por lo tanto, no puedan ser exportados al extranjero. Y considero que es urgente la presentación de ese proyecto de ley para evitar que se repita lo que recientemente ha acontecido<sup>2614</sup>. Nuevamente en la sesión de 1º de diciembre de 1903, Casa-Valencia volvería a presentar una nueva petición: (...) le agradeceré lo más pronto posible, traiga a las Cámaras el proyecto de ley, que me ofreció redactar, imitando al que existe en Italia, en el cual, después de reconocer la facultad que todos los particulares tienen de enajenar, en los términos que crean por conveniente, los objetos artísticos que poseen, se prohíbe terminantemente que esos objetos artísticos salgan del país<sup>2615</sup>.*

### **3.2. Los expolios de las obras de El Greco de la Catedral de Valladolid y una frustrada respuesta legal: El proyecto de ley de 1904 de exportación de obras de arte de Domínguez Pascual.**

#### **3.2.1. Los expolios de las obras de El Greco de la Catedral de Valladolid.**

---

<sup>2613</sup> Diario de Sesiones de Cortes. Senado. Núm.10, 26 de mayo de 1903, pp.68-70.

<sup>2614</sup> Diario de Sesiones de Cortes. Senado, Núm.67, Sesión del Viernes 6 de noviembre de 1903, pp.1163-1164.

<sup>2615</sup> Diario de Sesiones de Cortes. Senado, Sesión de 1º de diciembre de 1903,

El Proyecto de 1904 de Domingo Pascual nacería precisamente por la campaña que se había levantado por la venta de los dos Grecos de la Catedral de Valladolid, Un caballero de la Casa de Leiva y el San Jerónimo Cardenal. Desgraciadamente nuevamente se quedó en el tintero lo que hubiera constituido una de las aportaciones más significativas de la historia del derecho del Patrimonio Monumental español, quizás al poner trabas a la venta de los bienes de la Iglesia, siendo saboteado por la mayoría conservadora, impidiéndose que hubiese quórum en el Senado, por lo que ni siquiera llegaría a discutirse. Sin duda alguna va a ser la venta de una serie de cuadros del pintor cretense el desencadenante definitivo para que surgiera una verdadera concienciación nacional sobre los peligros que suponían la existencia ilimitada de exportación de obras de arte. La revalorización de las pinturas de El Greco a principio del siglo XX propició al mismo tiempo una verdadera concienciación pública sobre las pérdidas patrimoniales que se habían ido incrementando en los últimos años. En 1900 Pío Baroja había escrito una serie de artículos en defensa de la estética cretense en el periódico *El Globo* (el 26 de junio y 1 de julio) que marca el inicio de la rehabilitación de la importancia del pintor en la historia de la pintura española, alcanzando su confirmación oficial en la Exposición que se organizaría en su honor en 1902 en el propio Museo del Prado, sin olvidar la gran aportación que representaría el estudio monográfico de Cossío. Las ventas de una serie de cuadros del Greco despertarían por consiguiente un amplio rechazo tanto en los sectores intelectuales como en la propia opinión pública del país, alentando a su vez por la propia prensa nacional, en cuyas páginas fue apareciendo los distintos episodios del lamentable suceso. Aunque no forma parte de este estudio, creo que es interesante resaltar el estudio realizado por María Victoria Gómez Alfeo donde podemos apreciar

En 1904 unos cuadros de El Greco perteneciente a la Catedral de Valladolid iban a ser vendidos a raíz de la autorización del Nuncio Papal. Un industrial de Valladolid, Santos Alonso, los compró en 250000 pesetas para un anticuario madrileño. La noticia saltó a la opinión pública convirtiéndose una verdadera cruzada por parte de toda la prensa progresista que el Estado interviniera en el asunto. Así el 12 junio de 1904 aparecía en el periódico *El Globo* la primera noticia con el título *Venta de Cuadros* en la que se enuncia: El Cabildo de la Catedral intentó vender unos magníficos cuadros de El Greco. Algunos críticos como Mariano de Cavia reclamaría desde *El Imparcial* la atención del Gobierno para que evitase su venta, para lo que se recordaría el caso de los tapices de la Seo, que pudo ser impedido por la autoridad gubernamental. Sin embargo nuevamente se ponía en entredicho la actitud del Gobierno, que con la ley en la mano, en principio no podía impedirlo al ser una propiedad ajena a su carácter público. Desde algunas páginas de algunos periódicos se ponían en entredicho la naturaleza jurídica del bien de interés histórico y artístico, al criticar el carácter absoluto del dominio del propietario.

En el Heraldo de Madrid, el 13 de junio de 1904, con el título *Saqueo artístico*, informaba como una serie de pintores catalanes han intentado sin éxito adquirirlos, por lo que se mostraba partidario de que fuera el Estado el que debía recuperarlos, ya que estaba obligado a convertirse en guardián del único tesoro que nos queda: *La redención del cautiverio de mercaderes que se encuentran ya las dos obras del genial Domenico Theocopuli debía ser realizada por el Estado, pues él, y nadie más que él, está obligado a convertirse en guardián del único tesoro que nos queda: el tesoro artístico (...) Pero no basta con indignarse y con lamentarse, sino que ese asunto trasciende, desde el interés artístico, al interés nacional, y es hora de que intervengan, para remediar el daño, si aún es tiempo, el Gobierno y las Cortes (...) Hoy mismo, mañana lo más tarde, debía llevarse esta cuestión al Parlamento, en toda su amplitud y gravedad. Ha llegado el momento de que aquí se promulgue una ley, como la de la Ley Pacca en Italia, prohibiendo que salgan del territorio español cuadros, objetos de arte, porque sólo con tal prohibición se contendrá el botín de guerra y se logrará detener la obra bárbara de saquear los innúmeros depósitos de riqueza artística que aún hacen de España nación europea, nación civilizada. Hay que destruir la idea, desgraciadamente muy extendida, de que es del dominio particular y absoluto de un individuo o de una Corporación religiosa o civil la posesión de un cuadro, de una escultura, de una joya artística, de los que han logrado fama universal. Eso no pertenece a una persona, ni a muchas personas, sino en tanto que lo conservan y lo transmiten de generación en generación. Pero aún así, el dominio eminente es del Estado, quien a toda hora puede intervenir con derecho perfecto para estorbar y aún para castigar el despojo nacional. Del Greco, como de Velázquez o de Goya, y cien autores ilustres más, no se tiene nunca la nuda propiedad, sino algo así como el usufructo, al cual no puede ir aneja la venta al extranjero (...) Sin necesidad de esperar a que se presente proyecto o proposición de ley, el ministro de Gracia y Justicia puede y debe prohibir al Cabildo Catedral de Valladolid lo que antaño prohibió al Cabildo metropolitano de Zaragoza. Y sin perjuicio de interponer ahora el veto, prepararse con el fin de que inmediatamente se vote cosa análoga a la ley Pacca que tanta falta está haciendo en nuestro país. Pero nadie es un secreto esto que sucede demucho tiempo a esta parte; somos tierra de conquista, en la que maniobran de continuo agentes extranjeros, los cuales se introducen en iglesias, sacristías, Corporaciones de todas clases, y van desvalijando lentamente el tesoro nacional de arte, repartiendo por toda la Península. Al mismo tiempo apuntaba el valor económico del Patrimonio Monumental: Al Estado le corresponde poner coto a ese saco de España, no sólo en nombre de los intereses supremo de la idealidad, sino también en nombre de la prosa del presupuesto, de la prosa de la Hacienda, porque es incalculable el beneficio que el Estado podía reportar a la Nación, y por consiguiente, a él mismo si supiera y quisiera organizar una corriente de peregrinos artísticos de todas las partes del mundo que vinieran aquí a deleitarse, y a dejar su dinero, admirando el basto museo nacional. El artículo finalizaría exaltando el valor nacional del Patrimonio Monumental: Es la única grandeza que nos queda, y si no lo sabemos guardar, de poco a de servir que subsista una pretendida independencia y una nominal integridad del territorio; porque mientras aquí nos creemos Estado, ocurre que se saca a subasta en los mercados del*

*globo todo aquello en que está grabada y esculpida la historia de España*<sup>2616</sup>. Dos días después el Heraldo volvería a interesarse sobre el tema con un nuevo artículo titulado Los cuadros de El Greco, a los que se uniría el día 17 con el título *Filón que se agota* donde se subrayaba que se debía replantear el régimen patrimonial de los bienes artísticos: *Sería prudente examinar con detenimiento los títulos de propiedad o antecedentes de adquisición, y en tanto el Estado debe incautar de la cantidad en que se ha vendido los lienzos del inmortal Theotocopoli, si a ello no se opone el inminente Concordato y la extranacionalidad por él reconocida a los hoy activos, avisados y hábiles mercaderes*<sup>2617</sup>. El 17 de junio de 1904 el Heraldo advertía como el famoso retrato del Cardenal D. Fernando Nino de Guevara había salido de España y se encontraba en una galería de la capital de Francia, cuadro que había podido apreciar dos atrás en la Exposición dedicada al pintor cretense en el Museo del Prado<sup>2618</sup>. Finalmente, el 8 de julio de 1904, con el título *Los cuadros del Greco. Desaparición irremediable*, se da la noticia de la venta definitiva de los cuadros de Valladolid al Museo de Boston, realizándose con gran discreción toda la operación para que el Estado no prohibiera que los cuadros saliera de España, cuestionándose que había pasado del proyecto de la ley para prohibir la exportación de estas obras de artes, ya que muchos de estos cuadros se encontraban en depósitos en instituciones civiles y eclesiásticas, por lo que el Heraldo de Madrid se preguntaba si estaban en estas condiciones legales<sup>2619</sup>. Una vez más el Estado al igual que había ocurrido en años anteriores había mostrado su debilidad a la hora de impedir la venta al extranjero de obras de arte.

### **3.2.2. El proyecto de Ley de Lorenzo Domínguez Pascual en 1904: La defensa de los límites del derecho de disposición de los propietarios de bienes artísticos y arqueológicos.**

A lo largo de 1904 nuevamente se fue fraguando la idea de promulgar una ley de antigüedades, como reflejo de la ley italiana de 1902. En la interpelación del Conde de Valencia del 13 de febrero de 1904 en el Senado nuevamente se plantearía al Ministro de Instrucción Pública la necesidad de que fuera traído a la Cámara *un proyecto de ley, análogo a la ley que existe en Italia, para que los particulares usen del derecho a enajenar los objetos artísticos de su pertenencia, pero sin que éstos puedan ser exportados al extranjero. Me induce a insistir en esta petición, que ya tenía hecha anteriormente, el que ha llegado a mi noticia que en estos últimos días se han vendido preciosos objetos artísticos a extranjeros, que naturalmente se*

<sup>2616</sup> “Saqueo artístico”, El Heraldo de Madrid, Año XV, Núm.4952, Lunes 13 de junio de 1904,

<sup>2617</sup> “Arte y Artistas. El Filón que se agota” en *El Heraldo*, 9 de julio de 1904.

<sup>2618</sup> Filón que se agota, El Heraldo de Madrid, Año XV, Núm. 4956, Viernes, 17 de junio de 1904.

<sup>2619</sup> “Los cuadros del Greco”, El Heraldo de Madrid, Año XV, Núm.4977, Viernes, 8 de julio de 1904. GOMEZ ALFEO, María Victoria “La crítica de El Greco en la prensa española del primer tercio del siglo XX” en *Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*, Madrid, 22-25 de noviembre de 1904, Actas, Madrid1995, pp.339-340.



*proponen llevárselos a su país*<sup>2620</sup>. El incremento del mercado fraudulento de los bienes artísticos y arqueológicos en los primeros años del siglo volvía a convertir en una verdadera necesidad una respuesta legal, teniendo como base la libertad del propietario a enajenarlo siempre que fuese exportado. Se reafirmaba nuevamente el difícil equilibrio entre los intereses privados y públicos que en el espíritu de la legislación de principio de siglo estaba delimitando la base del ordenamiento jurídico. Por fin, el 23 de junio de 1904 el diputado Lorenzo Domínguez Pascual presentaría en el Senado un nuevo Proyecto de Ley sobre exportación de obras de arte, tomando como base el elaborado por García Alix y la ley italiana de 1902.

El proyecto de ley en esta ocasión era muy breve, estando articulado por la correspondiente Exposición de Motivos y ocho artículos, aunque no por ello de menor importancia, ya que volvería a retomar la tesis equilibradora entre la tutela pública y el derecho privado de bienes artísticos y arqueológicos. En la Exposición de Motivos se volvía a hacer una referencia de la pérdida patrimonial que había tenido nuestro país en las etapas precedentes, a pesar de los esfuerzos legislativos que se habían realizado, al mismo tiempo que se volvía a resaltar la importancia que el Patrimonio Monumental significaba para la exaltación de la identidad nacional: *Las reiteradas quejas de cuantas personas, peritas o profanas, se interesan por el esplendor y fomento de las Bellas Artes entre nosotros, las cuales no pueden permanecer impasible ante el triste y vergonzoso espectáculo, con harta frecuencia repetido, de que valiosas joyas artísticas traspongan las fronteras; el deseo unánime sentido de poner remedio al grave mal que nos priva de inapreciables bellezas, que, aparte del perpetuar el recuerdo de hechos hazañosos, tanto pueden contribuir al esclarecimiento de la Historia de España y la consideración de que dichas obras, por su carácter nacional y público, deben estar, en cierto modo, bajo la tutela del Estado, han movido al Ministro que suscribe a someter a la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto de ley, correspondiendo así al creciente impulso que ha recibido entre nosotros, de poco años acá, el estudio de este precioso ramo del saber humano.* El proyecto de ley se presentaba tomando como base las Reales Orden Circular del 28 de abril de 1837, por el que *se mandaba que bajo ningún pretexto se permitiera extraer de la Península para el extranjero, ni provincias de Ultramar, pinturas, libros ni manuscritos antiguos de autores españoles sin expresa R.O. que lo autorice y en la del 27 de mayo de dicho año, en que se dejó a juicio de una Comisión científica y artística designar las obras que merecieran ser conservadas y hacerlas trasladar a la capital para ser colocadas en edificios que sirviese a un tiempo de Biblioteca y Museo.*

El articulado se iniciaba estableciendo la obligación que tenía el Estado de cuidar de las obras de arte, al igual que se prohibiría su exportación (art.1º), los dos puntos vitales donde debía de apoyarse la tutela jurídica del Patrimonio

---

<sup>2620</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm. 124, Sábado 13 de febrero de 1904, p.2377.

Monumental en esta etapa. Se entenderían por obra de arte los monumentos arquitectónicos, esculturas, pinturas, inscripciones, libros, códices, manuscritos, monedas, medallas, trajes, tapices, grabados, cerámicas, armas, instrumentos y cuantos objetos arqueológicos puedan servir de algún modo para ilustrar la Historia o perpetuar el recuerdo de acontecimientos gloriosos (art.2). Al igual que el proyecto de 1900, sería autorizado el libre comercio de obras de arte en el interior del territorio español (art.3), mientras que no podría sacarla fuera sin autorización especial del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, para lo que debía de contar con el previo informe favorable de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando y de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos (art.4). Se establecía una sanción a aquella Corporación o particular que infringiese el precepto, por lo que debía de pagar el triple del valor del objeto exportado (art.4.2). En el caso de que fuese denegada la autorización, nuevamente se incluía el derecho de retracto, ya que el Estado adquirirá para sus museos las obras de arte, previo pago del precio que se fijará por el Ministerio de Instrucción Pública, teniendo en cuenta para ello la tasación que deberían hacer las Reales Academias y la propia Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo parte de todo informe denegatorio (art.5). Solamente el Ministro de Instrucción Pública podría autorizar la exportación temporal de obras de arte, cuando lo estimase oportuno, poniendo como única condición que hubiese *las garantías que considere necesarias para asegurar su conservación y que ha de reintegrarse al territorio nacional* (art.6). Como excepción a la limitación a la libre exportación de obras de artes quedarían las obras de autores vivos y las reproducciones, que serían objetos de libre tráfico y podrían ser exportadas (art.7). Al mismo tiempo quedaría autorizado el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para que fueran dictadas las disposiciones encaminadas al mejor cumplimiento de esta Ley (art.8).

El debate parlamentario celebrado el 10 de octubre de 1904 acerca del dictamen del proyecto de ley de exportación de obras de arte presentado por Lorenzo Domínguez Pascual reflejaría las amplias discrepancias que seguían existiendo en torno al derecho a la libre disposición del propietario privado de cualquier bien de interés histórico y artístico. El Duque de la Roca ya vislumbraba un trato tutelar diferente entre aquellos bienes pertenecientes a las Corporaciones públicas y las que formaban parte de la esfera privada, que era la tónica dominante de los sectores conservadores, al mismo tiempo que era criticado la funcionalidad del Registro que se debía de elaborar, al no perfilar cuales eran los bienes que debían quedar inscritos en el mismo: *Yo comprendo que se ponga límite a que las Corporaciones por el estado precario en que se encuentren o por desconocimiento del valor de esos objetos artísticos, los malvendan, y que el Estado se interese en que no salgan al extranjero; pero respecto a los particulares, esta limitación se convertiría en una expoliación o en un fomento de la industria de los corredores de aquí, porque los que se dedican a este negocio pueden*

*comprarlo en España y luego venderlos a un extranjero, con lo cual sufren depreciación los objetos artísticos, y hay un tercero que se lucra con estas ventas. De modo que es preciso saber si el particular que no haya registrado estos objetos, y cuyo registro es voluntario, puede venderlos o no (...) <sup>2621</sup> El Marqués de Guadalerzas, miembro de la Comisión, daría una respuesta vacua, al no aclarar cuáles eran los bienes que no podían ser vendidos al exterior, mientras que no existiera confeccionado el registro, por lo que puntualizaba que esta ley se refería a los objetos que pudiéramos considerar como objetos artísticos o arqueológicos raros, a todos aquellos que, o bien por su mérito superior artístico o por su recuerdo histórico, ligado con las glorias nacionales, merezca figurar en los museos patrios, por lo que todos aquellos bienes que fueran de propiedad particulares y no merecieran figurar en los museos públicos, podían ser objeto de libre tráfico, por lo que podría ser transmitido lo mismo dentro del territorio nacional que fuera de él; subrayando en todo momento el respeto de los derechos de los particulares, señalando además la existencia de otro artículo, el 12, que preceptuaba como mientras se formaba el catálogo completo de la riqueza artística y arqueológica nacional, el Gobierno adoptaría las medidas necesarias para garantizar a los particulares, el libre tráfico interior o exterior de las obras de arte, con lo cual, de cada mil obras de arte que hayan de circular, habrá una que tengan interés los Museos en adquirirlas. Todas las demás podrán ser objeto de libre tráfico, sin entorpecimientos de ninguna clase (...) <sup>2622</sup>.*

La libre disposición del bien por un particular sería defendida por el Duque de Roca a la hora de cuestionar la enajenación que se había producido con los cuadros de El Greco: *La cuestión es si puede o no disponer libremente de las obras de arte (...) El particular que lo posea, ¿puede venderlo o no puede, si este proyecto llega a ser ley? Porque el proyecto no se deduce nada, y esto es lo que es preciso aclarar (...) El particular que no tiene registrado un objeto de arte, sea el que sea, ¿puede o no venderlo libremente, como ahora sucede, a un francés, a un angloamericano, a quien quiera que sea? Eso que quede bien claro en el proyecto (...).* La respuesta contundente del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino Domínguez Pascual, dejaba perfectamente aclarado la postura tutelar del Gobierno, limitando la libre exportación de aquellas obras de arte digna de estar conservadas en un museo: *Pregunta el Sr. Roca si el día que este proyecto sea ley, un particular podrá libremente traficar y exportar, obras artísticas de las comprendidas en el art.2º, y yo le digo a S.S. que no, que necesitará la autorización del Ministerio, que se le concederá o denegará, según entienda que procede en cada caso. Por consiguiente, si esto es lo que S.S. quería saber y era bastante para que se opusiera a la aprobación de la ley por todos los medios que estén en su alcance, puede hacerlo; pero es lo que se pretende con ella, que una obra artística de importancia no pueda exportarse sin la autorización del Estado, ejerciendo éste una especie de tutela sobre dichas obras de arte, con lo cual desaparecerá la libertad absoluta que hoy tienen los particulares para disponer de ellas en cuanto a su enajenación.* La intervención estatal en el comercio de las

---

<sup>2621</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, 10 de octubre de 1904, p.98.

<sup>2622</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, 10 de octubre de 1904, pp.99-100.

obras de arte sería calificada por el Duque de Roca como una expoliación, siendo respondido por el Ministro de Instrucción Pública que no se cometería tal acto al ser el Estado el adquirente del bien que el particular quería vender en el extranjero, *lo que tiene es que cambia la personalidad del comprador, siendo éste el Estado español en vez del extranjero. Esto es todo, y no veo con ello haya expoliación ni perjuicio para la propiedad particular.* Desde esta posición nuevamente se estaba defendiendo el derecho de retracto por parte del Estado.

La interpelación del Marqués de Guadaleras abriría una revisión conceptual del bien de interés histórico y artístico, al considerar que no debía de ser exclusivo del propietario sino que su pertenencia iba más allá de lo puramente particular: *Lo que hay es que con el derecho de expropiación se establece a favor del Estado un derecho verdaderamente importante e indiscutible. Mal hace el propietario de una obra de arte si se considera dueño absoluto de ella, con la facultad plena de usar y aun de abusar. Allá en su fuero interno, debe pensar que no es tan dueño de eso como de otras cosas que se dedican a los usos de la vida, y que hay una especie de copropiedad por parte del Estado en obras de esta clase. Es mi sentir, en particular no es ni siquiera dueño, sino meramente un tenedor o usufructuario que está obligado a destinar la obra a sus fines; y aquel que destruye una obra de arte, aquel que la transforma indebidamente, aquel que la esconde a la pública admiración.* De la misma manera señalaba como en la propia legislación inglesa, protectora indiscutible del derecho de la propiedad privada, había ido naciendo un sistema normativa tutelar del Patrimonio Monumental de los particulares, limitando la libre disposición de los bienes: *¿Cuántas veces se cita a Inglaterra como protectora del derecho individual? ¿Cuántas veces se la señala como ejemplo de respeto profundísimo a todo lo que sea propiedad privada! Y, sin embargo, sabe S.S. que en Inglaterra existe una ley del año 1882 respecto de obras artísticas, en la cual, si bien no se prohíbe la exportación porque no lo necesita, en cambio, como allí se necesitaba la conservación de monumentos y obras de arte, se establece que los particulares que tengan un edificio de valor histórico o artístico tienen obligación de conservarlo, no pueden ni siquiera reformarlo sin autorización de las Comisiones correspondientes; y si alguna vez le destruyesen o transformasen sin esa autorización, sobre pagar una multa, y una multa cuantiosa, serán condenados nada menos que a una pena que fluctúa entre tres y treinta días de reclusión, con trabajos forzados ¿Qué se diría si aquí se hiciera una ley semejante? (...) Seguramente S.S. debiera convenir conmigo en que si de algo peca esta ley es de escrupulosa con exceso en su respeto a la propiedad privada, que se traduce en todo (...).* Finalmente quedaría aprobado el artículo 6. Leído el artículo 7º fue aprobado sin debate, así como los restantes de que se componía el proyecto de ley. El Presidente: Este proyecto quedará sobre la mesa para su votación definitiva<sup>2623</sup>. La votación definitiva del proyecto de ley exigiendo determinadas garantías para la exportación de obras de arte se celebraría en la sesión del Senado del 29 de noviembre de 1904, siendo 126 los senadores que votarían afirmativamente, frente a un voto negativo, el del senador Saavedra.

<sup>2623</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, 10 de octubre de 1904, pp.99-103.

Sin embargo, a pesar de ello, el proyecto de ley no saldría adelante, al quedar anulado la votación favorable, al aludir el Duque de la Roca irregularidades administrativas en el procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara. Quedaba por consiguiente en suspenso la votación definitiva del dictamen<sup>2624</sup>.

### **3.3. Un nuevo proyecto de Ley de exportación de obras de arte: El proyecto del Conde de Casa-Valencia de 1905-1906.**

En la sesión del Senado del 13 de noviembre de 1905, el Conde de Casa-Valencia presentaría una proposición de Ley exigiendo determinadas garantías para la exportación de obras de arte. Dicha proposición de Ley había sido finalizada el 3 de noviembre de 1905 y significaba un nuevo camino a la hora de limitar la libre disposición de las obras de arte por parte de los particulares. La Proposición estaría formada por 15 artículos, repitiendo prácticamente en los mismos términos el espíritu del proyecto de ley anterior. Al igual que en el proyecto de 1904, se definían como obras de arte y arqueológicas los monumentos arquitectónicos, esculturas, pinturas, grabados, dibujos, cerámicas, vidrios, medallas, inscripciones, monedas, tapices, telas, trajes, armas, instrumentos, libros, códices, manuscritos, y en general, todos aquellos objetos cuyo especial valor artístico o histórico los haga digno de figurar en los museos públicos (art.2). Quedarían exceptuadas las obras de autores vivos (art.11). Se establecía como deber del Estado la conservación de las obras artísticas o arqueológicas de interés nacional, para ser exhibido públicamente, haciendo nuevamente hincapié en que se prohibiera su salida del territorio nacional (art.1).

Inspirada en la legislación italiana, se regularía el comercio de los bienes artísticos, en función de la propiedad a la que perteneciera, distinguiéndose entre las instituciones públicas, las entidades religiosas y los particulares. No cabe duda que se estaba intentando resolver los problemas que habían conllevado hasta este momento la libre disposición del propietario en el mercado artístico, y que había representado una fuga de obras de arte al exterior, pero por el contrario se consideraba que en el interior del territorio español, la libertad del propietario debía de ser ilimitada como bien objeto del comercio. De esta manera aquellos bienes pertenecientes a Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y establecimientos públicos de enseñanza o beneficencia, Academias y demás centros y Corporaciones de carácter oficial, en cualquiera de sus grados, que quisiera *transmitir del todo o en parte la propiedad de alguna obra artística o arqueológica o enviarla fuera del territorio español*, tendría que ser autorizada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, para lo que se debía de elaborar una instancia haciendo constar que no tenían obligación de conservar dicha obra y tenían libertad de

---

<sup>2624</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.48, 29 de noviembre de 1904, pp.735-736.



disposición de la misma, expresando las causas que motivan su determinación (art.3.1). El Gobierno, una vez instruido el expediente, si se reconociera su derecho a adoptarla, de acuerdo con el informe de la Real Academia de la Historia, de las Bellas Artes o de la Junta Superior del Cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, según los casos, acerca del mérito de la obra y del interés nacional de su conservación, otorgaría o denegaría la autorización solicitada (art.3.2). En el caso de los bienes pertenecientes a los cabildos de las catedrales, colegiatas, iglesias, parroquias, conventos y demás institutos religiosos, también tendrían que ser autorizados por el Estado, siempre que tratase de transmitir la propiedad de alguna obra artística o arqueológica, o de llevarla fuera de España, aunque dejaba la posibilidad de intervenir en el expediente a la autoridad eclesiástica, por lo que no se otorgaría *nunca la licencia pedida sin previo acuerdo entre ambas potestades* (art.4.1). Si se denegase por razón de interés nacional la autorización para su venta, la obra sería adquirida por el Estado, para ser exhibida públicamente en los museos públicos correspondientes, con el consiguiente pago a su legítimo dueño, aunque en caso de no haber acuerdo en el precio entre las partes, con arreglo al justiprecio que se haga mediante peritos y tercero en discordia, e incluso en el caso de que hubiera una expropiación forzosa por causa de utilidad pública (art.4.2). Al igual que en el caso de las Corporaciones Públicas y las Instituciones eclesiásticas, el Estado podría limitar el comercio de obras de arte que fueran propiedad de aquellas Asociaciones de índole privada, protegida más o menos directamente por el Estado, con subvenciones o en otra forma cualquiera, por lo que también tenían que contar con la autorización del Ministerio de Instrucción Pública, llegando incluso a estar sujetas a la expropiación forzosa. Sin embargo, si estas Asociaciones Privadas renunciarán a la protección oficial, y recobrarán su carácter puramente privado, en principio podrían disponer libremente de los bienes de su propiedad (art.5). Por el contrario, la intervención del Estado quedaría limitada en el ámbito de los bienes pertenecientes a los particulares y las Asociaciones de carácter privado, al poder disponer libremente de sus obras artísticas y arqueológicas, dentro del territorio nacional, no así en el caso de que fueran exportados, que debía ser autorizado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el cual, de acuerdo con el informe de las Corporaciones facultativas tantas veces citadas, otorgará o denegará la autorización dentro de los treinta días laborables si la obra estuviese registrada, y de noventa en otro caso, desde la presentación de la instancia. Cualquier demora dará derecho a reclamar indemnización de daños y perjuicios al interesado (art.6.1). En caso de denegación, se procedería al justiprecio y pago, por causa de utilidad pública (art.6.2). Al mismo tiempo se intento resolver una cuestión problemática del momento, el comercio de aquellos bienes que estuviesen ubicados en las provincias, que quedaba alejado de la tutela de la administración centralista de las Cortes, por lo que se estableció que cuando una obra que se quisiese exportar no se encontrase en Madrid, y su dueño no quisiera llevarla para su inspección, se dispuso que el

Gobierno podría encomendar los informes acerca de ellas a las respectivas Escuelas o Academias provinciales de Bellas Artes, a los jefes de los archivos históricos, bibliotecas y museos arqueológicos provinciales, o a las Comisiones de monumentos, según los casos y circunstancias (art.7). Se incluía una sanción penal a aquellas Corporaciones o particulares que infringiesen los preceptos de esta ley, siendo castigados con el pago del triple del valor del objeto a que se refiera la infracción (art.8). El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes podría autorizar la exportación temporal de obras artísticas o arqueológicas, previas las garantías necesarias de su conservación y de su reintegro seguro al territorio nacional (art.9).

La elaboración de un Registro de obras artísticas y arqueológicas de interés nacional, con sucursales en todas las provincias, por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes volvería a ser reivindicado en el proyecto de ley, pero distinguiendo su carácter obligatorio en virtud de la propiedad del bien, al disponerse su inscripción como obligatorio para las Corporaciones y Centros relacionados con el Estado inscritas en los artículos 3º, 4º y 5º de la presente ley y voluntario, para los particulares y Asociaciones puramente privadas. Se subrayaría la defensa de la propiedad privada al considerar que toda persona o colectividad que aparezca en él como dueño de una obra, tendría a su favor la presunción de su propiedad mientras no se pruebe lo contrario (art.11). La tutela pública de los bienes arqueológicos había sido delimitada en la legislación española en base a su régimen patrimonialista, distinguiéndose entre las excavaciones que se habían realizados en los terrenos particulares y los terrenos de dominio público, en la que quedaba limitada en el caso de los primeros la intervención del Estado, y que había provocado en muchos casos una pérdida del patrimonio arqueológico. El equilibrio entre el derecho de la propiedad privada y el interés general del Estado propio del espíritu de este proyecto de Ley quedaría patente una vez más a la hora de paliar la cuestión de las excavaciones arqueológicas, como podemos contemplar en el contenido del artículo 13, que sería criticado por los sectores más conservadores. En el citado precepto, se volvía a disponer la disyuntiva tutelar en función al régimen patrimonialista, pero se incrementaba claramente el papel intervencionista del Estado, limitando las prerrogativas que hasta este momento había contado los propietarios, por lo que aunque en sus terrenos de su propiedad, se podría hacer todo tipo de excavación, se incluía la obligación de que debía de ser comunicado al Gobierno y todas aquellas excavaciones que se hiciesen tendrían que hacerse bajo la inspección pública. Asimismo se consideraba la posibilidad de que cualquier finca privada podría ser expropiada para practicar en ellas excavaciones, en caso de que el dueño se hubiese negado, para lo que se transmitiría el oportuno expediente para la previa declaración de utilidad pública, que sólo podría decretarse por acuerdo legislativo (art.13.1). En el caso de que se realizasen las excavaciones en terrenos de dominio público o del Estado, no se podrían hacer sin la

autorización del Gobierno, que lo otorgaría solamente si fuese cedida la mitad de cuanto se encontrase, para ser destinada a la exhibición pública en los museos pública. Los problemas de financiación que habían sido una tónica general en la política tutelar del Patrimonio Monumental se intentaría paliar con la consignación en los presupuestos generales del Estado, sin perjuicio de la cantidad destinada o que se destine a la conservación de monumentos, la suma de 250.000 pesetas, que se destinarían a para la adquisición de obras artísticas o arqueológicas de interés nacional, la realización de excavaciones y la instalación de museos (art.14).

Se nombraría una Comisión sobre conservación de obras de arte cuyos miembros estarían formados por los senadores Arias de Miranda, el Conde de Casa Valencia, Avilés, el Marqués de Laurencín, Salvador, Solsona y Bastida<sup>2625</sup>. El 27 de octubre sería presentado en el Senado el Dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley exigiendo determinadas garantías para la exportación de obras de arte, por el *que queriendo guardar y tener para con la propiedad particular todos aquellos miramientos y respetos tradicionales que le son debidos, en su deseo de que por nadie pueda atribuirse un carácter de expoliación a esta proposición de ley, cuyo espíritu es meramente de defensa de las obras artísticas de la Nación, ha creído conveniente modificar el artículo 6º, con lo cual la Comisión estima que haya desaparecido todo motivo de controversia*. Nuevamente como había ocurrido en los debates parlamentarios de las proposiciones anteriores el derecho de la propiedad privada se volvería a convertir en el objeto vital de la discusión entre las dos tendencias sobre tutela pública que en este momento se vislumbraban en el ámbito del pensamiento legislativo español. De esta manera el senador Pardo Balmonte se convertiría en un defensor a ultranza de la propiedad privada de los bienes artísticos y arqueológicos, por lo que pide que fueran retirados los artículos 13 y 14, y especialmente el artículo 6º. Una de las críticas que se daban al artículo 6º fue precisamente la falta de recursos que contaba el Estado para adquirir bienes artísticos a los particulares a través del derecho de tanteo: *¿Qué recurso se dan al Gobierno para que ejercite ese derecho de tanteo? (...). Por virtud pues de este artículo se consignan 250000 pesetas; pero con este triple destino, y todos los Sres. Senadores habrán comprendido, con la simple lectura del mismo, que la aplicación primaria de dicha cantidad será para la instalación de museos o excavaciones, y la secundaria para la adquisición de obras artísticas. Es decir, que resulta ilusorio el derecho de tanteo que se concede al Estado*. Las distintas disposiciones legislativas que fueron promulgándose en estos años, limitando el derecho de la propiedad privada, serían criticadas duramente por Pardo Balmonte, precisamente para criticar la intervención estatal que supondría el artículo 13 de la proposición de ley: *(...) Pero el ataque al derecho de propiedad resulta más evidente si recordáis los artículos 350 y 351 del Código Civil (...) Esta es la legislación vigente, Sres. Senadores, que no ha llegado el*

<sup>2625</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión del martes 28 de noviembre de 1905, Núm.37, p.457.

*momento de que sean modificados los artículos 350 y 351 del Código Civil, que garantizan de tal suerte la propiedad privada. Va picando en historia que un año y otro año se presenten a los Cuerpos Colegisladores proyectos de ley encaminado a mermar, a debilitar el derecho de propiedad. ¿No recordáis un proyecto de expropiación por causa de utilidad pública que prescindía de algún derecho del propietario, al cual se presentó aquí una enmienda, que aceptada por la Comisión, fue aprobada con ella? (...) ¿No recordáis un proyecto de caza que fue objeto de ruda oposición en las Secciones por lo que tocaba al artículo que concedía a los cazadores la facultad de entrar en los terrenos abiertos, sin permiso del dueño, después que estuviera recogida la cosecha? (...) Si para muestra basta un botón, con estos recuerdos he traído a vuestra memoria nada menos que presento cuatro, y el quinto se contiene en la segunda parte del artículo 13, que por su gravedad estoy seguro de que la Comisión no podrá menos de meditar acerca de estas ligeras observaciones que acabo de exponer sobre su alcance, procurando que de ningún modo resulte menoscabado el derecho del propietario, y por tanto, que si atendible cuanto acabo de exponer, tenga la bondad, si lo cree oportuno, de retirar los artículos 13 y 14, y darles la redacción que considere más conveniente<sup>2626</sup>.*

La respuesta de un miembro de la Comisión, el senador Aviles, sería contundente, al defender el equilibrio entre el derecho de la propiedad privada y los intereses generales en el ámbito de las obras de arte. Comienza su intervención recordando el anterior proyecto de 1904 presentado por Domínguez Pascual, y la oposición que tuvo por parte de algunos senadores del artículo 6º, por lo que se ha intentando en esta ocasión cambiar el espíritu de la ley: (...) *El Señor Pardo Balmonde ha recordado aquí que este proyecto en la forma primitiva, en la forma que un inolvidable compañero nuestro, el malogrado Marqués de Guadalquivir, dictaminó el presentado por el Ministro Conservador, Don Lorenzo Domínguez, fue aprobado por el Senado, y que solamente en la votación definitiva no obtuvo los votos necesarios, aunque muchos obtuvo de calidad; sobre lo cual yo llamo la atención de S.S. y la de todos los Sres. Senadores, porque se ha dicho que ciertos elementos hacían oposición, y no hubo entonces allí en esa votación de considerable número de Senadores distinción ninguna de opinión, pues todos, antes que políticos y antes que hombres de opinión particular determinada en cierto sentido, eran patriotas y españoles. Por venir esa votación después de otra numerosísima y encontrar los ánimos cansados, no pudo tener los votos necesarios. No he de negar yo que hubo cierta oposición, no solamente por parte del Sr. Senador que pidió la votación nominal constantemente, sino de otros Sres. Senadores, que entendieron que había merma o mengua en la ley para la propiedad individual. Precisamente eso es lo que ha querido corregir la Comisión, según se ve en el artículo 6º que ha leído S.S. comparándolo con el 6º del dictamen anterior (...) La Comisión se hizo cargo de esas circunstancias desfavorables para la aprobación de la ley y las ha salvado ¿Qué otra cosa representa el derecho de tanteo? ¿Qué más ha de desear el propietario que poder enajenar la obra de arte de su propiedad por el precio que se le hubiera ofrecido? Dice S.S. que eso del derecho de tanteo será ilusorio porque figura una*

---

<sup>2626</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.131, Sesión del martes 30 de octubre de 1906, pp.1778-1780.

*cantidad pequeña en el artículo 14 para ejercitarlo. El art.14, que tiene, como S.S. ha indicado al leerlo, varios conceptos para distribuir esa suma, se refiere acaso que no sea de tanta importancia que requiera que el Gobierno no acuda a las Cortes (...)*<sup>2627</sup>.

El resto de su intervención se convierte en un verdadero alegato del derecho del Estado a intervenir en dominio privado en caso de que esté en juego los intereses nacionales, como estaban siendo en estos años las excavaciones de Numancia o la propia Itálica: (...) *Es doblemente satisfactorio para mí y para la Comisión, en cuyo nombre, tengo el honor de contestar al Sr. Pardo Balmonte, es doblemente satisfactorio, porque las observaciones de S.S. se han limitado a algunos puntos contenidos en los artículos 6º y 13º, del que más se ha ocupado, referente a las excavaciones. Sabe el Sr. Pardo Balmonte, puesto que empezó diciendo que este proyecto fue presentado el año 1904 por un Ministro Conservador, D. Lorenzo Domínguez, que viene a responder a una necesidad sentida por todo el mundo en España; sentida aún en el extranjero, por más que allí de este sentimiento sólo se aprovecha lo que a nosotros podía dolernos (...) Lo que me duele es que esas grandes obras de arte, por medio de engaños, por medio verdaderamente ilícitos, ocultándose de las miradas de todo el mundo, vayan, como he dicho antes, por un mísero pedazo de pan a ser enajenadas para enriquecer colecciones extranjeras (...) Supongo que habrá visto S.S., y por eso he sus observaciones se limitaron a esos dos o tres artículos, que hay otros que se refieren a la propiedad colectiva, que es uno de los puntos de vista más completo que tiene la ley: la diferenciación entre la propiedad personal o particular y la propiedad colectiva. Y esto, realmente no es cosa nueva ni mucho menos, es muy antigua. Antes que los italianos lo hicieran con el edicto de Pacca, teníamos nosotros aquí las atinadísimas disposiciones de Carlos III (...) dispuso que se tuviera mucho cuidado en defender las obras de arte, oponiéndose a esas depredaciones, que ya entonces había comenzado, aunque no tenían el alcance de las de ahora. (...) Y como el pensamiento primero y fundamental de la misma, es que no se diga nunca que se atenta de un modo doloso a la propiedad particular, la Comisión no tiene inconveniente en que este artículo se redacte de una manera que pueda satisfacer a S.S., consignando en la sustancia y en el fondo la prescripción de tal modo que no pueda ver, ni S.S., ni nadie, que se ataca a la propiedad. (...) Aquí mismo en España tenemos las excavaciones de Numancia, en donde todos, unos y otros, sin distinción de partido, porque en esto no cabe tal distinción por ser una cuestión española, esencialmente patriótica, todo el mundo ha excitado a los Gobiernos para la formación de una Comisión importante de personas de gran valor como son los Sres. Mélida (...), que ya han hecho algunas excavaciones verdaderamente notables, librándonos así de que vengan aquí extranjeros a realizarlas, a descubrir nuestras riquezas históricas y artísticas. Y lo mismo puede decirse por lo que respecta a las ruinas de Itálica, en donde apenas se ha hecho nada ordenado, habiéndose descubierto solo algunas estatuas importantes. ¿Vamos a dejar eso completamente en poder y a merced de alguien que diga: Yo como dueño de esto, tengo tal derecho a ello, que no puede de ninguna manera el Gobierno intervenir*

<sup>2627</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.131, Sesión del martes 30 de octubre de 1906, p.1781.



*como representante de la Nación. Eso no puede ser tratándose de algo que están cifradas la Historia y la honra de España, como acontece en Numancia*<sup>2628</sup>.

En el Proyecto de ley aprobado definitivamente en el Senado el 2 de noviembre de 1906, serían modificados los contenidos de los artículos 6º, 7º, 9º, 10º, 12º y 13º y 14º, concretamente aquellos que habían limitados el derecho del propietario de las obras de arte. El artículo 6º conciliaría el interés público con la libre disposición del propietario particular, por lo que los particulares y las Asociaciones de carácter privado podrán disponer libremente de las obras artísticas y arqueológicas a que se refiere esta ley dentro del territorio nacional. Sin embargo, siguiendo la legislación anterior en caso de que se *quisiera exportarlas* se pondría en *conocimiento del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el cual, antes de resolver, pedirá informe a aquella de las Corporaciones citadas en el art.3º a quien el asunto corresponda*. En caso de que el informe fuera favorable, sería autorizado por el Ministerio de Instrucción Pública *dentro de los quince días laborables, si la obra estuviera registrada, y de los treinta días no estando, mientras que en el caso de que la corporación informante, atendiendo al mérito y al precio de la obra, estimara que ésta no debe salir de España, el Gobierno, la adquirirá*, por lo que ejercería el *derecho de tanteo en el término de noventa días y sin gravamen ni impuesto para el vendedor*. Se incluía un carácter formalista al procedimiento al incluir el plazo en el que tenía que ser presentado la instancia, concretamente *a partir de la presentación de la correspondiente instancia*, pero se incluía como excepción en el caso de que las Cortes estuviese cerrado, por lo que el Gobierno tendría que pedir a la Cámara *el crédito necesario para la adquisición de la obra*, por lo que en tal caso *los noventa días se contarán desde la fecha en que las Cámaras reanuden sus tareas*. En caso de demora se daría al interesado *derecho a indemnización de daños y perjuicios*. El artículo 9º facultaba al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes la autorización de la exportación temporal de obras artísticas o arqueológicas, *previo el favorable informe de la correspondiente Corporación facultativa y el acuerdo de las Cortes del Reino y previas las garantías necesarias de su conservación y de su reintegro seguro al territorio nacional*. Quedarían exceptuadas las obras de autores vivos, y *aquellas cuya ejecución date de menos de cincuenta años* (art.10).

El otro punto de conflicto del proyecto de ley que había sido la cuestión de las excavaciones arqueológicas, sería también resuelto como equilibrio entre los intereses nacionales y particulares, al darle un nuevo contenido el artículo 13, distinguiéndose entre las efectuadas en los terrenos de dominio público, en la que se prohibiría hacer excavaciones sin autorización del Gobierno, otorgándola solamente mediante la cesión de la mitad de cuanto se encuentre, tomadas en cuenta la cantidad y la calidad con destino a los museos públicos, y

---

<sup>2628</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.131, 30 de octubre de 1906, pp.1178-1182.

las efectuadas en los terrenos privados, que serían autorizados las excavaciones, imponiendo la obligatoriedad de los dueños de las fincas diesen *al Gobierno cuenta de que van a practicarlas*, al mismo tiempo que debían de ser sometido a su inspección *cuando por las investigaciones o datos científicos se suponga o resulte la existencia de objetos de alto interés histórico*. No cabe duda de que supondría una verdadera novedad en el ámbito de la legislación arqueológica, ya que supondría un paso trascendental a la hora de configurar a los bienes arqueológicos como dominio público, limitando claramente la disposición libre de los particulares, clave primordial en la tutela pública del Patrimonio Monumental, que contaría con la correspondiente oposición de los sectores más conservadores. La expropiación de una finca privada por utilidad pública por el Estado quedaría incluido definitivamente, que solo podría quedar decretado por acuerdo legislativo. Se consideraría a su vez que los objetos que de aquellos bienes que iban a ser exportados, debería *entregarse previamente reproducción en vaciado o en fotografía, según los casos*. En el Proyecto de Ley también se intentaría resolver las carencias económicas del Estado a la hora de adquirir los bienes artísticos, por lo que quedaría incluido en el artículo 14 que sería consignado en los presupuestos generales del Estado, sin perjuicio de la cantidad destinada o que se destine a la conservación de monumentos, la suma de 250.000 pesetas para la adquisición de obras artísticas o arqueológicas de interés nacional, excavaciones e instalación de museos, *siempre que resulte algún sobrante de la adquisición de las obras de artes y de las excavaciones*, medida que prácticamente quedaba inaplicable.

El 27 de diciembre de 1906 se volvería a producir en el Senado un nuevo debate en torno al proyecto de ley de exportación de obras de arte que se intentaba promulgar desde el inicio de siglo. En esta ocasión se daba la voz de alarma por la enajenación de unas arquetas por parte del Cabildo de la Catedral de Córdoba, a lo que se uniría las publicaciones extranjeras que estaban dando la noticia del amplio mercado artístico que se había convertido nuestro país, sin ningún tipo de limitaciones. La intervención del académico de Bellas Artes de San Fernando, el senador Aviles reavivaba la importancia de la promulgación definitiva de una ley de exportación de obras de arte: *No sé si S.S. recordará que yo formé parte de la Comisión que aquí se ocupó del proyecto de ley, hoy pendiente de aprobación en la Cámara popular, respecto de la exportación de obras de arte al extranjero. Son tantas las quejas que ha habido de la desposesión en que nos vamos encontrando de estas obras de arte, que constituyen un verdadero tesoro, y una gloria de nuestra Patria, que creo que estamos en el caso de procurar impedir, por todos los medios posibles, la depauperación en que España va encontrándose tocante a este punto*. El debate finalizaría con la intervención del Conde de Casa-Valencia, verdadero autor del proyecto de Ley, pidiendo al Ministro de Estado que instara a que fuera aprobado rápidamente por el Congreso: *Yo soy, como recordará el Sr. Ministro de Estado, el autor del proyecto de ley para que no se exporten los objetos de arte en España. Este proyecto lo he presentado en varias*

*legislaturas, y siempre ha quedado pendiente o de la aprobación del Congreso o de la aprobación del Senado, pero aprobado ya por el Senado se halla actualmente en el Congreso.* Desgraciadamente el Proyecto presentado no pasó de ahí, por lo que nuevamente se había perdido una oportunidad para resolver los problemas que hasta este momento se había tenido a la hora de configurar definitivamente una verdadera legislación del Patrimonio Monumental.

### **3.4. Una discusión en las Cortes sobre tutela pública del Patrimonio Monumental en 1907: la salida de obras de El Greco al extranjero y la necesidad de promulgar una nueva ley de exportación de obras de arte.**

Los cuadros de la Capilla de San José de Toledo fueron ejecutados en 1597; a raíz de un contrato entre El Greco y Martínez Ramírez, patrono de dicha capilla, que consistiría en la realización de un retablo para el altar mayor y dos para los laterales. Se erigiría en 1594 con el dinero aportado por el tío del cliente, también llamado Martínez Ramírez. En el altar mayor se situaría los lienzos de San José con el Niño, y en los laterales San Martín y el pobre y la Virgen con el Niño, Santa Marina y Santa Inés. La obra sería valorada por los tasadores en 31.328 reales. En 1907, el Conde de Guendulain pondría en venta dos de ellos, el *San Martín y el pobre* y *La Virgen con el Niño*, lo que originaría un amplio debate promovido por el diputado Puig i Cadafalch al que se unieron en oposición al Gobierno Juio Burell, Rodrigo Soriano y Gumersindo de Azcárate. Probablemente de atenta lectura podemos sacar los fundamentos jurídicos en que apoyaban los sectores más progresistas a la hora de configurar definitivamente una legislación que pudiera tutelar el ilimitado tráfico de obras de arte que se estaban produciendo hacia el extranjero, que sin ninguna duda estaba en la superación de la concepción patrimonialista del bien histórico-artístico, para lo que se intentaba regular unas limitaciones a sus propietarios particulares, incluido la Iglesia. De ahí que el debate se centrara en los supuestos derechos que había tenido el Conde de Guendulain para enajenar dichos cuadros, que estaba fundamentado en su propio derecho de la propiedad, por lo que apelaba a poder usar el bien como quisiera. Sin embargo, nuevamente el Estado no impediría la consumación de la venta, por lo que el *San Martín y el pobre* y la *Virgen con el Niño*, que permanecieron durante un tiempo a la colección José Widener, posteriormente se trasladarían a la National Gallery. El *San José con el Niño* permanecería en España, aunque en el Museo de Santa Cruz de Toledo, sin duda alguna se habían perdido uno de los conjuntos más bellos y expresivos realizados en palabras de Lafuente Ferrarai por El Greco, provocando en su día la protesta de Cossío en páginas encendidas en dolor patriótico<sup>2629</sup>.

---

<sup>2629</sup> LAFUENTE FERRARI, Enrique *Breve historia de la pintura española*, Tomo 1, Madrid, 1987, p.212.

Los debates que se iban a producir en torno a la venta producida por el Conde de Gudes girarían en el fondo en la cuestión de la naturaleza jurídica del bien de interés histórico-artístico, que en el caso de ser un bien privado, como era el de los cuadros del Greco, se superponía el interés privado sobre el interés general. Una segunda cuestión del debate se centraría en el régimen patrimonial en que estaban regidos los cuadros, ya que si no hubieran pertenecidos a la esfera particular del supuesto propietario, no hubiera tenido derecho a despojarse del mismo, ya que se que formarían parte del dominio de la fundación. El debate producido el 14 de octubre de 1907 entre el entonces Ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro y el diputado Puig y Cadafalch es un ejemplo significativo de cómo se estaba desarrollando en el seno de la opinión política una nueva manera de actuar en los casos que fueran exportados bienes artísticos sin autorización del Estado, que en principio el particular seguía teniendo su derecho a hacerlo, al ser considerado un bien inherente a su persona. La cuestión estribaba nuevamente, al igual que se estaba planteando en el Senado, si estos cuadros pertenecían o no al Conde, ya que si formaba parte de su esfera privada el Estado no podría intervenir, pero si fuera en caso contrario, que pertenecía a una capellanía, en la cual el Conde era simple administrador entonces, el Estado podía recurrir a una intervención. La intervención del Ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro, Ministro de Instrucción Pública, se convierte en un alegato de la obligación de las instituciones pública respecto de la tutela del Patrimonio Monumental, aunque distinguiendo en función al régimen patrimonial del bien histórico y artístico al respecto: *Todo el que se ocupa de estas cosas (...) saben perfectamente que este género de bienes, como otros muchos, pueden pertenecer y pertenecen a entidades diferentes, pueden pertenecer al Estado Central, pueden pertenecer a las distintas representaciones de interés público en las provincias, pueden pertenecer a las Corporaciones sujeta a la acción de la autoridad pública, pero pueden pertenecer también a particulares, integrados por completo en su propiedad privada y, por consiguiente, siendo un objeto de derecho civil en cuyo movimiento no tiene absolutamente que intervenir para nada las autoridades públicas; y así como respecto de aquellos objetos que pertenecen de una u otra manera al acervo común y al interés común del Estado, de la provincia o del Municipio, las autoridades tienen, por razón de cultura y por razón del cuidado que les está encomendando respecto de todas clases de bienes públicos, que intervenir constantemente para que ellos se administren de la mejor manera posible, y para que puedan o no ser enajenados conforme a las leyes que rigen esta clase de propiedad, así respecto a la propiedad privada lo único que las autoridades tienen que hacer es respetarla y no mezclarse para nada en aquello que los dueños de cada objeto puedan creer conveniente hacer dentro de un perfecto derecho que en ningún país civilizado se puede perturbar. De suerte que esta no es una cuestión como quiere presentarse de defender mejor o peor ciertos objetos por la importancia que tengan para el acervo artístico del país. En este punto no habría seguramente diferencias en ninguna parte de la Cámara, ni las habría respecto del Gobierno, cualquiera que fuese el que ocupara este banco. Pero desde el momento en que se trata de una propiedad privada, no se yo porque esta propiedad recaiga en un objeto de arte esté regida por disposiciones diferentes de aquella que*

*rigen la propiedad privada respecto de los demás objetos. Por consiguiente, el problema en este caso consistiría en saber si los cuadros a que se ha referido el Sr. Puig pertenecen o no a la propiedad privada, para medir y apreciar con relación a ellos la conducta de las autoridades (...). Por consiguiente, el debate no estaba centrado en el ámbito de la intervención pública sobre la propiedad privada, que como se puede apreciar dejaba por hecho la defensa del dominio privado, sino que estaba definido en función al régimen patrimonial de estos bienes<sup>2630</sup>: Esto lo sé por la razón sencilla de que en el Ministerio de mi cargo, al tenerse la noticia de que esos cuadros podían ser objeto de una enajenación, el Ministro que entonces ocupaba este departamento (...) dispuso que siendo para el caso dudoso si esos cuadros pertenecían o no a la propiedad privada, entretanto que esto se dilucidase, quedasen detenidos; pero el propietario de estos cuadros, que se encontró siendo objeto de una retención gubernativa de cosa que pertenecía a su propiedad, acudió al Ministro de Gobernación, acreditando allí, según mis noticias, con el informe favorable para su derecho de la Junta de Beneficencia de Toledo, y por consiguiente de sus autoridades, para reivindicar lo que de pleno derecho le pertenecía; y en el Ministerio de la Gobernación, después de un examen detenido del asunto, se declaró que, en efecto, aquello no tenía nada que ver con la Beneficencia Pública, y, por consiguiente, que por ese ramo de la Administración no había motivo ninguno para mantener la intervención que se había puesto a la disposición de los cuadros de El Greco, con lo cual acudió al Ministerio de mi cargo el propietario de los citados cuadros, presentándome la Real orden de Gobernación para que viese que la medida que preventivamente se había tomado no podía subsistir porque partía de una equivocación, cual era la que no le perteneciesen en propiedad plena los cuadros de que estamos hablando. Pareciéndome, no obstante, a mí que necesitaba todavía una mayor depuración, quise que me presentaran de nuevo todos los documentos que lo acreditaran; encontrándome con que estaba declarado judicialmente que la Capilla de San José, cómo de Patronato familiar y que mediante el Convenio celebrado con la Santa Sede, era de entera disposición de una persona determinada, y lo eran también por consiguiente todos los objetos que constituían el Patronato que hoy, en adjudicación de ese Patronato y en adjudicación libre, habían hecho los Tribunales. Yo a mi vez pregunto cómo podría mantenerse lo que ya constituiría una arbitrariedad manifiesta, el que se tuviera detenida una propiedad privada, y que, por consiguiente, se hubiese sometido un hecho que de ninguna manera podía ser sostenido, dado que lo que constituiría de esa suerte sería una especie de confiscación de la propiedad que afecta a un derecho tan sagrado, tan legítimo como en este que acabo de referirme. Véase, pues, como en este asunto particular ni las autoridades ni el Gobierno podían hacer otra cosa que respetar una propiedad declarada por los Tribunales y que constituye un derecho tan libre como el de cualquier otra propiedad para aquellas personas a quienes aquellos objetos pertenecen<sup>2631</sup>.*

---

<sup>2630</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso, Sesión de 16 de octubre de 1907, Núm.71, p.1845.

<sup>2631</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso, Sesión de 16 de octubre de 1907, Núm.71, p.1846.



El resto del discurso se centraría en la necesidad de elaborar una ley de tutela pública del Patrimonio Monumental, pero con la excepcionalidad de respetar el derecho de la propiedad privada, sin limitar por consiguiente la enajenación de los bienes: *El Sr. Puig con mucho acierto, ha querido preguntar al Gobierno si pensaba hacer algo en la materia, no ya precisamente sobre estos cuadros, sino, en general, en defensa de objetos artísticos que existen en España y que son un preciado timbre de nuestra nacionalidad. Yo, sobre ello, no tengo más que hacer un breve recuerdo que puedo llamar histórico, de la acción del Gobierno en todo a lo que a eso se refiere, no de este Gobierno, sino de todos los Gobiernos que de algún tiempo atrás se vienen preocupando, y con muchísima razón, de evitar en lo posible que los cuadros y objetos artísticos que existen en España salgan de su territorio, y al efecto, comenzaron, hace ya algunos años, por decretar, y se está practicando, un Catálogo de todas la riqueza artística española, provincia por provincia. En cada uno de los casos en que las autoridades han creído que debían intervenir para defender esta riqueza, han intervenido, y estando una gran parte de ella confiada a instituciones religiosas, han procurado ponerse de acuerdo el Ministerio de Instrucción Pública y el Ministerio de Gracia y Justicia, para evitar que de esos objetos se dispongan (...). Cabría hacer una cosa; ya se ha intentado también: una ley que, a semejanza de las que existen en otros países, pusieran ciertas condiciones para que no se verificasen con facilidad enajenaciones que nos privan de una manera definitiva de estos objetos del arte que todos quisiéramos conservar; pero yo tengo que decir a los Sres. Diputados que la dificultad con que en esto se tropieza es la misma que tiene por fundamento aquellas ideas generales que yo acabo de exponer, relativamente a la distinta acción del Estado, y de la ley, por consiguiente según se trate de propiedades públicas, de cualquier género que sean, o de la propiedad privada, supuesto que cuando se trata de esta última, no hay otro medio de impedir el ejercicio de ella que el de la expropiación por el Estado, que ha de llevar consigo la correspondiente indemnización. Como la indemnización de todos estos objetos pertenecientes a los particulares estaría muy por encima de los medios de que puede disponer, no sólo el Estado español, se tropieza con una gran dificultad para que las leyes de este género tengan alguna eficacia. Véase, si no, lo que ocurriría que en este caso particular de los cuadros de El Greco (...). Sabido es que no más allá del año último, fue aprobado por el Senado un proyecto de ley dirigido a ese objeto, que vino a esa Cámara, y que no pudo discutirse y aprobarse por la disolución de la misma. Pues bien; en ese proyecto, reconociéndose el principio de que no podía impedirse la enajenación, cualquiera que fuere el fin con que se hiciese, que los particulares verificasen de aquello que en plena propiedad le correspondía, se estableció el precepto de que había de llevarse anualmente los presupuestos del Estado un crédito de 250.000 pesetas, con objeto de proveer a las indemnizaciones que se debiesen a los particulares que, tratando de enajenar sus propiedades, se encontrasen con que el Estado usaba del derecho de tanteo que se consignaba en ese mismo proyecto. Fueron 250.000 pesetas, repito, la cantidad única que se pensó que podía por entonces consignarse para ese fin en el presupuesto del Estado. Ahora bien; estos cuadros, como ha tenido el honor de exponer, se ha vendido, según se dice, en 300.000 francos, lo cual indica que, aun cuando aquella ley hubiese sido aprobada y hecha la consignación de las 250.000 pesetas, no se hubiese podido evitar con esta ley el hecho que todos lamentamos. Por consiguiente, lo único que yo puedo decir al Sr.*

*Puig y Cadalfach (...) es que el Gobierno, a lo sumo, lo que podría hacer sería reproducir el proyecto de ley del que se trata; pero (...) no nos hagamos ilusiones, no resultaría satisfecho el objeto que todos quisiéramos perseguir, esto es que no saliera del territorio español ni una sola obra que fuese verdaderamente artística.*

El día 16 de octubre de 1907 se reanuda el debate con la intervención del diputado Puig Cardafalch haciendo una defensa del dominio público del patrimonio arqueológico de una nación, apelando a que fuera promulgada una legislación a la misma que se había establecido años anteriores en Grecia: *Según el Ministro de Instrucción Pública no podemos hacer lo que ha hecho Italia, alguno ha condicionado la propiedad artística privada, y cita Grecia, que únicamente ha declarado ser del Estado los productos de las excavaciones, porque el arte es la única riqueza de aquel país. Yo no comprendo una tierra donde todo sea monumentos, no puedo comprender que en Grecia sea todo arte. Grecia es un país como los demás de Europa (...) Y no es posible que en Grecia que todos los sitios donde pudieran practicarse excavaciones fuesen del Estado, cuando el Estado hizo la declaración a que S.S. aludía, porque los solares de los templos han sido poblados por la gente en todas partes, y los recintos sagrados, han venido a ocuparlas los humanos, y la propiedad antigua sagrada y santa, ha pasado a ser propiedad particular de hecho y yo creo que de derecho, como en Egipto, como en todas partes, en que sobre las grandes edificaciones antiguas han llegado a edificarse pueblos enteros modernos, y el subsuelo en Grecia es propiedad particular como el suelo. De modo que Grecia, en sustancia, ha hecho algo parecido a Italia en interés público, en interés del Estado, declarándolas propiedad común las obras que las excavaciones proporcionan para la utilidad pública; que no es esta cuestión de unos cuantos que se entretienen en horas de ocio en el estudio de la arqueología, sino algo importantísimo para la cultura (...).* En la respuesta del Ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro, se volvía a palpar el estado de la cuestión, o lo que es lo mismo, la necesidad de conciliar el interés general con el derecho de la propiedad privada; éste último verdadero obstáculo para la promulgación definitiva de un proyecto de ley de obras artísticas: *Pero S.S. ha traído dos recuerdos, uno que se refiere al ejemplo de Grecia, y S.S. no ha podido negar, ¿cómo había de negarlo?, que lo que ha hecho el Gobierno griego es reservarse la propiedad de todo aquello que tiene que ser objeto de descubrimientos por las excavaciones que allí constantemente se están practicando. Debe saberlo bien S.S., y esto en principio, para todos los terrenos y obras que se relacionan con el Estado es reconocido por nosotros, al punto de que si no estoy equivocado y no recuerdo mal, en nuestro pliego de condiciones para obras públicas se dispone que todo lo que se descubra artístico es del Estado. Por consiguiente, en principio hemos aceptado el principio mismo que ha aceptado Grecia, porque no es exacto que España esté tan descuidada en el cuidado, en la diligencia que requiere un punto tan interesante, todos los reconocemos, como el de la conservación de nuestras obras artísticas. (...) Viendo después S.S. a indicar que podemos olvidar el pasado y que pensemos en el porvenir, y para eso excitaba al Gobierno para que presentara alguna ley dirigida a armonizar la cultura artística del país y la propiedad, que es el obstáculo con que podemos tropezar y con qué tropezamos efectivamente (...). ¿Por qué se coloca el Sr. Puig en el supuesto de que nosotros nos vamos a oponer a eso, y que no estamos dispuestos a participar de esos*

sentimientos, y dentro de la ley y dentro del derecho a buscar que las dos cosas se concilien? Puig y Cadafalch volvería a insistir que se estableciesen las medidas propuestas en la ley italiana de 1902, la tasa de exportación de obra de arte así como la capacidad de expropiación por parte del Estado: (...) *Yo no quiero insistir más en esta cuestión, pero creo que es deber del Gobierno el atajar el mal limitando y condicionando el derecho de propiedad, respetándolo en lo que fuere justo, y teniendo en cuenta que las obras de arte han subido de precio, no por ellas mismas en sí, no por obra de sus dueños, sino por algo que es la cultura común, habiendo en ellas como una especie de accesión moral que no han hecho los propietarios de esas obras, sino todo el país en conjunto, es decir, la cultura general, la civilización. Hay, que buscar un medio, que puede ser el del impuesto de exportación, el del impuesto el de las ventas, o el de la ley italiana que comprende eso, y además la expropiación, y hacer posible a los presupuestos pobres del Estado con la cooperación de los Museos públicos de España, municipales y provinciales, el evitar que esa vergüenza se repita.* El Sr. Ministro de Instrucción Pública replicaría al diputado liberal poniendo en entredicho su concepción de la propiedad privada: *El señor Puig y Cadafalch tiene ideas muy singulares respecto de la propiedad y del derecho, que yo no puedo discutir con S.S., porque para discutir es preciso tener un punto de partida común, y S.S. lleva sus ideas respecto a lo que es la propiedad al extremo de decir que todos los aumentos del valor que la propiedad va teniendo no son de los propietarios, sino del Estado.*

La intervención del diputado liberal Vicenti se centraría en la necesidad de promulgar definitivamente de una ley de exportación de obras de arte, inspirada en la legislación italiana: *Este debate, promovido en virtud de una pregunta, es realmente interesante y ha de producir un sentimiento, y en su virtud hasta un acuerdo, a mi juicio, unánime en la Cámara, haciendo que el Gobierno adopte alguna resolución, pues como se ha dicho aquí, y se dice en todas partes, los únicos Gobiernos que pueden y deben tener interés en materia como las que discutimos son los de Italia y España. Italia ha luchado y ha vencido; lo mismo los que tremolaban la bandera en pro del arte que los que tremolaban en pro del respetable derecho de la propiedad, han llegado a un acuerdo, y aquellos edictos como los de Doria y Pacca de 1802 y 1820, como los edictos de Florencia y Nápoles, todos han cristalizado en una ley, la del Ministro Nassi. Pues bien: en España la lucha continua: todavía el respetable derecho de propiedad está batallando con el que llamaré sagrado, con el que se deriva de nuestros sentimientos patrióticos. (...) Todos recordareis que el proyecto del Sr. Domínguez Pascual fue presentado a consecuencia de la venta de unos Grecos de Cabildo de Valladolid, que sirvieron para comprar un órgano; y el proyecto del Sr. Rodríguez San Pedro, que no sabemos si se presentará, también es ocasionado por la venta de otros Grecos, en Toledo (...).* Una vez más el objeto del debate quedaría centrado en la naturaleza jurídica del bien artístico, en el que en su carácter intrínseco fuera público a pesar de que perteneciera al dominio privado: *Es indudable que el derecho de propiedad es respetable; pero no hay que olvidar, Sres. Diputados, que en esta cuestión de los Grecos de Toledo, ocurre una cosa singularísima, y es que no se trata de un relicario, de una arquilla, de un cáliz, de un objeto artístico de un particular; se trata de algo más grande (...) de algo que es público, que es, pudiéramos decir, propiedad de Toledo y de España entera (...) ¿Se puede vender la tapicería de la Casa Real o los Velázquez del Museo del Prado?*

*Desde el punto de vista legal sí; pero por encima de esto se halla la sanción social, y eso son tesoros que la Nación considera como propios. La respuesta del Ministro de Instrucción Pública, defendiendo el derecho de la propiedad privada, lo fundamentaría en la amenaza de una simple confiscación del Estado: Después de S.S. nos hablaba de la propiedad en términos tales, que a mí causaba verdadera admiración, por esa distinción que S.S. ha hecho en daño de los artistas, de que la propiedad artística, no obstante la compra, encargo o pago que se haga de una obra cualquiera, no pasa al propietario, sino que pasa a la Nación directamente (...) con lo cual lo que resultaría es que nadie compraría jamás una obra artística desde el momento en que supiese que iba a hacer el sacrificio para que luego no quedase suyo el objeto comprado. Al mismo tiempo haría una clara defensa sobre el derecho de retracto y tanteo: En la ley italiana y en la de Grecia y en las de las demás Naciones que se han ocupado de estas cuestiones, tiene S.S., no solo detalles, sino un arsenal de conocimientos para traer aquí un proyecto de ley que pueda satisfacer a todos y que no pueda perjudicar, más que en aquello que sea racional, a los particulares; porque, por ejemplo, hay el detalle del derecho de tanteo; es decir, que si un particular va a vender un objeto a un extranjero, el Estado español tenga medios de decirle: yo tengo prioridad en esa compra<sup>2632</sup>.*

En la misma Sesión del 16 de octubre se presentaría una proposición para que el Gobierno impidiera la extracción de obras de arte cuyo contenido sería: *Los diputados que suscriben proponen al Congreso se sirva declarar que el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para impedir la exportación de las obras de arte ínterin presente a la Cámara un proyecto regulando dicha exportación. Serían firmados por los diputados José Puig y Cadafalch, Federico Requejo, Joaquín Ruiz Jiménez, Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate, Melquiades Álvarez y González y Jaime Carner<sup>2633</sup>. La respuesta del Ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro es tajante sobre la aprobación de la misma: Si la proposición fuese lo que acaba de indicar el Sr. Puig y Cadafalch, el Gobierno no tendría ninguna dificultad en admitirla (...) pero si es la invitación para que el Gobierno falte a las leyes, yo no puedo aceptar esa proposición. Puig y Cadafalch insistiría que fuera aprobada por el Gobierno: Nosotros creemos que el Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes tiene, dentro de las prescripciones legales, los medios necesarios para evitar que continúe esa expoliación de obras de arte (...) De modo que ese adjetivo necesario no quiere decir ni puede querer decir que los Ministros deben faltar a las leyes; es una invitación al Gobierno para que dentro de los medios legales impida o haga lo necesario para impedir la expoliación de las obras de arte. De modo que puede el Gobierno aceptar la proposición. Finalmente, la proposición del diputado sería aceptada por el Ministro de Instrucción Pública, Rodrigo San Pedro<sup>2634</sup>.*

---

<sup>2632</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso, Sesión de 16 de octubre de 1907, Núm.71, p.1848.

<sup>2633</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Sesión de 16 de octubre de 1907, Núm.71, p.1849.

<sup>2634</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Sesión de 16 de octubre de 1907, Núm. 71, p.1850.

En la sesión del Congreso del día 17 de octubre de 1907, el debate se centraría nuevamente en el dominio del bien artístico, si pertenecía a la esfera privada del Conde o a la fundación de la Capilla de San José. El diputado Soriano negaría el carácter privado de los bienes pertenecientes a la Capilla de San José de Toledo: *Esos cuadros no son de propiedad particular, en el estricto sentido en que S.S. lo decía (...) La Capilla de San José, en la cual aparece, según S.S. como dueño de los famosos cuadros de El Greco, el conde de Guendulaín, no es, ni los cuadros tampoco, propiedad de dicho señor (...). Su Señoría parece que ignora también (...) que se siguió ha pocos años, precisamente por la posesión de esta Capilla de San José en la ciudad de Toledo, y al que concurrió nada menos que el ilustre jurisconsulto D. Manuel Silvela. Precisamente en este pleito está la clave de todo cuanto ayer se discutió en la Cámara. Fue D. Manuel Silvela, con motivo de este pleito que entablo entre los dueños, patronos, poseedores de la riqueza y del solar y edificio de la capilla de San José y otros que pretendían traerlos para sí; y entonces después de este pleito, fue nombrado el Sr. Conde de Guendulaín patrono de la iglesia de San José, que no es un oratorio particular, sino una iglesia pública como cualquier otra (...) Así, pues (...) queda probado perfectamente que el hecho (...) no es producto del resarcimiento por un particular de tesoros artísticos (...)*<sup>2635</sup>. Nuevamente el Ministro de Instrucción Pública volvería a defender el carácter privado del bien artístico: *Y en los demás, S.S. ha hecho una afirmación y ha creído que traía demostración plena de que esa afirmación era totalmente exacata, es a saber: la de que esos cuadros pertenecían a un interés público y no pertenecían al interés particular (...) pero esto ya no es una cuestión de arte, esta no es ni siquiera una cuestión propiamente administrativa; esta es una cuestión de derecho, y todas las consideraciones que se ha servido hacer S.S., las podía hacer, no ya sobre los cuadros del Greco, sino sobre las tierras, las casas y cualesquiera otros objetos que están en la propiedad humana y que no tienen condiciones artísticas, sino condiciones industriales, agrícolas, etc.; porque para determinar hechos comprobados que una cosa pertenece a una u otra persona, la cuestión de arte no sirve absolutamente para nada, no conduce a nada, no caracteriza nada; lo que le caracteriza es esa relación del hombre con el objeto que forma la propiedad, y que, repito, lo mismo puede ser sobre unos cuadros, que sobre muebles, que sobre unas tierras, que sobre una casa, que sobre todo lo que esté en el patrimonio humano*<sup>2636</sup>.

En la sesión del 19 de octubre de 1907, el Ministro de la Gobernación aludiría la imposibilidad legal de actuar sobre un bien de propiedad privada al no existir una ley específica sobre la materia: *Yo no podía sin tener competencia, ni absolutamente ningún medio legal, olvidar lo que acerca del derecho de la propiedad establece la Constitución y disponer que esos cuadros no fueran movidos de donde estaban(...)* Su Señoría debe comprender que si yo hubiera tenido medios legales los hubiera empleado para impedir que esas joyas artísticas salieran de mi país, pero con todo mi deseo y todo mi amor a las bellas artes, careciendo de facultades, no puedo hacer nada. En la sesión del 26 de octubre de 1907 se

<sup>2635</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso, Sesión del 17 de octubre de 1907, Núm.72, p.1861.

<sup>2636</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Sesión del 17 de octubre de 1907, Núm.72, p.1864.



prolongaría el debate sobre el régimen patrimonial de los cuadros de la capilla toledana. Por su parte el Ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro resumiría los actos administrativos que fueron realizados tanto por su Ministerio como el de la Gobernación para impedir la salida de los Grecos: *Un patrono que se encontraba en plena posesión de los bienes que constituía el patronato, intentó hacer la enajenación de uno de los objetos que le pertenecían, puesto que había sido resultado de la adquisición del patronato, para formar el capital en que se fundaba ese patronato (...) lo cierto es que al ir a enajenarlos se encontró con una prohibición administrativa, un embargo establecido para que no se ejercitarse uno de los actos que lleva consigo esa posesión, o sea el disponer de esos objetos. Había, un embargo, y el patrono interesado acudió primero al Ministro de Gobernación, porque creía que a él competía, reclamando contra aquel embargo; lo mismo que haríamos Sres. Diputados todos y cada uno de nosotros si nos encontrásemos en una situación semejante con una disposición administrativa que nos privara de la disposición de bienes que teníamos en nuestra mano (...) creo que ningún Sr. Diputado reconocerá autoridad en nadie para que por una sola determinación, sin apoyarse en título ninguno, embarazar a un ciudadano español en la disposición de sus bienes (...) el propio Ministro de Gobernación, después de haber oído a todas aquellas entidades que podían ilustrarle en el asunto, encontrándose con la opinión de todas ellas de que no existía en las condiciones de aquella fundación nada que legitimase la intervención de los ramos que corresponde regir al Ministro de Gobernación, declaró que no hallaba nada por lo que pudiera mantener aquel acto de arbitrariedad de privar a un ciudadano, sin título alguno para ello, de la libre disposición de una parte de sus bienes, fuesen éstos o no obras de arte, y dictó una Real orden en este sentido. (...) Le pedí una cosa (...) que me presentara los títulos de propiedad (...)*<sup>2637</sup>. A continuación defendería el derecho del patrono de la fundación a disponer de los cuadros de El Greco: (...) *No negará el Sr. Azcarate (...) que constituía un patronato familiar, de sangre, respecto de la capilla de San José (...) es indudable que los derechos que a ese patronato se referían, están en la familia de los sucesores del fundador; más llegadas las leyes de desamortización, de desvinculación, de extinción de una u otras fundaciones, que constituían la masa de lo que se llamaba mano muerta en nuestra leyes, para hacer que (...) desapareciese el estancamiento de la propiedad, por el que se siguieron dos principios completamente distintos: el uno, el de la incautación por parte del Estado, para que de alguna manera entrasen en circulación los bienes según perteneciesen a una u otra entidad colectiva (...) Pero estas disposiciones (...) se establecía como una excepción para esta incautación por el Estado, todo lo que fueron patronatos familiares, patronatos de sangre (...) Estos bienes continuaban en la familia, pero no continuaban en situación de vinculación, esto es, de no enajenables (...).*

Los bienes de la Capilla quedaban exceptuados de las medidas desamortizadoras en virtud del artículo 6º de la Real orden de 1843, como el propio Ministro de Instrucción Pública precisaría en el debate: *Y se llegó a un convenio (...) de julio-agosto de 1897, según cuyo convenio todos esos bienes podían*

---

<sup>2637</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Sesión del 26 de octubre de 1907, Núm.79, p.2069.

*ser adjudicados a las familias sin otra obligación que la de redimir las cargas que tuvieran, en inteligencia, no ya con el Estado, sino con la Iglesia, mediante condiciones de redención de cargas, sobre las cuales tenía que velar exclusivamente la propia Iglesia en cuyo beneficio estaban establecidos esos patronatos. Y como este nuevo estado de derecho había comenzado a tener lugar por una ley de 1841 (...) según su artículo 6º, en el primero de sus párrafos, que de la acción del Estado en relación con esos bienes en general de colectividades que constituyesen manos muertas, quedaba exceptuado todo lo que se refiriese a patronatos, capellanías, fundaciones de toda índole de carácter familiar o de sangre, el entonces Conde de Guendulaín, patrono indiscutido de esa fundación, acudió al Gobierno solicitando la excepción que ese art.6º se establecía, y entonces recayó a favor de esa familia la Real Orden de 1843 (...) Desde ese momento la cuestión estaba terminada ya para las relaciones del Estado con esa familia; fuesen unos u otros los poseedores de esos bienes dentro de la familia, para el Estado estaba ya todo resuelto en 1843, porque el Estado había declarado que estaban exceptuados de la incautación de los bienes de ese patronato<sup>2638</sup>. Posteriormente a raíz de una sentencia judicial adquirirían la condición de propietario privado en virtud de un acto de jurisdicción voluntaria al ser declarado como heredero los bienes de la Capilla: (...) porque lejos de ser irregularidad de ningún género en la función judicial en que se adjudican esos bienes a los Sres. Conde de Guendulaín, es el procedimiento que se determina en el título XI, del Libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (...) precisamente se refiere a esos patronatos, a esas capellanías colectivas, a esas fundaciones, determinando como el Poder judicial puede hacer esa adjudicación de bienes, que es como se ha hecho en este caso a favor del Sr. Conde de Guendulaín<sup>2639</sup>. Concluiría su ponencia reafirmando que el Ministerio de Instrucción Pública carecía de potestad para impedir la disposición de los bienes: Digan lo que digan aquellas personas que no quieran acomodarse a los textos mismos de las leyes para describir una situación de derecho, no podrá hacerse otra cosa, y el negar esa condición a los documentos que se presentaban por el patrono hubiera equivalido a un verdadero despojo, a negar el reconocimiento de un derecho perfecto que habían definido los únicos que tienen autoridad para eso, que son los Tribunales (...) por lo que no se encontraba modos ni fundamentos bastante para sostener aquel embargo (...) <sup>2640</sup>, ratificando una vez más el carácter confiscatorio de una supuesta acción del Ministerio con respecto a estos bienes: Tanto el Sr. Ministro de Gobernación como yo, no hemos hecho más que respetar un estado de derecho que estaba creado por decisiones de la Administración y por decisiones de los Tribunales (...) hemos dicho que respetamos aquel derecho, y como el derecho es de propiedad, no podíamos interponernos en el uso de esa propiedad. El diputado Azcarate se opondría a la tesis que había mantenido Rodríguez San Pedro negando el fundamento jurídico defendido por el Ministerio*

<sup>2638</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso, Sesión de 26 de octubre de 1907, Núm.79, p.2069.

<sup>2639</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso, Sesión de 26 de octubre de 1907, Núm.79, p.2070.

<sup>2640</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Sesión de 26 de octubre de 1907, Núm.79, p.2071.

El 14 de octubre de 1907 se reanudaría el debate en el Congreso, cuestionándose nuevamente la impronta que el derecho de la propiedad privada dejaba en la tutela pública del Patrimonio Monumental, siendo un claro ejemplo significativo la interpelación de Rodríguez San Pedro, para quien el derecho de la propiedad era inviolable y por consiguiente no se podía poner ninguna limitación a la exportación de obras de artes por parte de los particulares: *Y la razón es sencillísima, porque todo el que se ocupa de estas cosas (...) saben perfectamente que este género de bienes, como otros muchos, pueden pertenecer y pertenecen a entidades diferentes, pueden pertenecer al Estado central, pueden pertenecer a las distintas representaciones de interés público en las provincias, pueden pertenecer a Corporaciones sujetas a la acción de la autoridad pública, pero pueden pertenecer también a particulares, integrados por completo en su propiedad privada, y, por consiguiente, siendo un objeto de derecho civil en cuyo movimiento no tiene absolutamente que intervenir para nada las autoridades públicas; y así como respecto de aquellos objetos que pertenecen de una u otra manera al acervo común y al interés común del Estado, de la provincia o del Municipio, las autoridades tienen, por razón de cultura y por razón del cuidado que les está encomendado respecto de toda clase de bienes públicos, que intervenir constantemente para que ellos se administren de la mejor manera posible, y para que puedan ser o no enajenados conforme a las leyes que rigen esta clase de propiedad, así respecto a la propiedad privada lo único que las autoridades tienen que hacer es respetarla y no mezclarse para nada en aquello que los dueños de cada objeto puedan creer conveniente hacer dentro de un perfecto derecho que en ningún país civilizado se puede perturbar (...) En este punto no habría seguramente diferencia en ninguna parte de la Cámara, cualquiera que fuese el que ocupara este banco. Pero desde el momento en que se trata de una propiedad privada, no sé yo porque esa propiedad recaiga en un objeto de arte esté regida por disposiciones diferentes de aquellas que rigen la propiedad privada respecto de los demás objetos*<sup>2641</sup>.

De esta forma, el debate no estaba centrado como apuntaría el propio Rodríguez San Pedro, en el derecho de la propiedad privada de los bienes artísticos, si no si los cuadros del Greco pertenecían al dominio particular o a la Iglesia, para así actuar de una manera determinada las autoridades administrativas correspondiente: *Por consiguiente, el problema en este caso consistiría en saber si los cuadros a que se ha referido el Sr. Puig pertenecen o no a la propiedad privada, para medir y apreciar con relación a ellos la conducta de las autoridades. Al mismo tiempo puntualizaría cual había sido el procedimiento realizado tanto por el Ministerio de Gobernación como el del Ministerio de Instrucción Pública: (...) siendo para el caso dudoso si esos cuadros pertenecían o no a la propiedad privada, entretanto que se dilucidase, quedasen detenidos; pero el propietario de esos cuadros, que se encontró siendo objeto de una retención gubernativa de cosa que pertenecía a su propiedad, y siendo la duda que entonces existía la de si pertenecían o no al ramo de Beneficencia, acudió al Ministerio de Gobernación, después de un examen detenido del asunto, se declaró que, en efecto,*

---

<sup>2641</sup> Diario de las Cortes, Congreso, Núm.69, Sesión de 14 de octubre de 1907, p.1779.

*aquello no tenía nada que ver con la Beneficencia pública, y por consiguiente, que por ese ramo de la Administración no había motivo ninguno para mantener la intervención que se había puesto a la disposición de los cuadros de El Greco, con lo cual acudió al Ministerio de mi cargo el propietario de los citados cuadros, presentándome la Real orden de Gobernación para que viese que la medida que preventivamente se había tomado no podía subsistir porque partía de una equivocación, cual era la que no le perteneciesen en propiedad plena los cuadros de que estamos hablando*<sup>2642</sup>. Asimismo precisaría que el patrono de la capilla de San José atestiguaría jurídicamente que los cuadros del Greco pertenecían a su propiedad por lo que podía libremente enajenarlo: (...) *encontrándome con que estaba declarado judicialmente que la capilla de San José, como de Patronato familiar y mediante el convenio celebrado con la Santa Sede, era de entera disposición de una persona determinada, y lo eran por consiguiente también todos los objetos que constituían el Patronato que hoy, en adjudicación de ese Patronato y en adjudicación libre, habían hecho los Tribunales. Yo a mi vez pregunto cómo podría mantenerse lo que ya constituiría una arbitrariedad manifiesta, el que se tuviese detenida una propiedad privada, y que, por consiguiente, se hubiese cometido un hecho que de ninguna manera podía ser sostenido, dado que lo que constituiría de esa suerte sería una especie de confiscación de la propiedad que afecta a un derecho tan sagrado, tan legítimo como es este que acabo de referir. Véase pues, cómo en este asunto particular ni las autoridades ni el Gobierno podían hacer otra cosa que respetar una propiedad declarada por los Tribunales y que constituye un derecho tan libre como el de cualquiera otra propiedad para aquellas personas a quienes aquellos objetos pertenecen*<sup>2643</sup>.

La interpelación del académico Elías Tormo en la sesión del Senado el 19 de octubre de 1907 resumiría la nueva concepción que se le estaba dando al Patrimonio Monumental, al considerarse un bien que iba más allá del régimen patrimonialista a la que perteneciera, independiente de quien fuera su propietario, poniendo incluso en cuestión el carácter absoluto de la propiedad privada: *Yo creo que en cada uno de los casos en que nos hallemos delante de un problema de propiedad particular, debe el Estado meditar mucho acerca de él antes de tomar cualquier determinación. Se ha dicho por el Sr. Ministro de Instrucción Pública, que la Constitución nada menos que la Constitución, y yo lo reconozco también, ha cancelado respecto de la propiedad particular el carácter obligatorio que pudieran tener las disposiciones de la ley recopilada, por las cuales se prohibía la enajenación de las obras de arte; pero donde termina la propiedad particular, y mientras el Estado español, en uso de su soberanía, legisla, donde termina la propiedad particular, digo, donde termina por tanto, la plenitud del principio establecido por la Constitución. De ahí que defendiera que sin necesidad de que se tuviera que promulgar una nueva legislación, el Estado tenía facultades, para declarar por medio de Real decreto (y estoy por decir que ni siquiera se necesita la firma del Rey para ello, y puede suplirse en este caso) por simple Real Orden para sancionar la prohibición de la venta de las obras de arte intentada por los Ayuntamientos, por las*

<sup>2642</sup> Diario de las Cortes, Congreso, Núm.69, Sesión de 14 de octubre de 1907, p.1780.

<sup>2643</sup> Diario de las Cortes, Congreso, Núm.69, Sesión de 14 de octubre de 1907, p.1780.

*Diputaciones, por los establecimientos de enseñanza, por los de Beneficencia Pública y por los establecimientos en los cuales tiene el Estado el protectorado.*

En una interpelación posterior, la del senador Avilés, el 22 de octubre de 1907, procedió a recordar los proyectos de ley que se habían presentado en años anteriores, refiriéndose especialmente a los problemas jurídicos que había supuesto el régimen patrimonialista del bien del interés histórico y artístico: (...) *Recordaréis que el Sr. Domínguez Plata, reiterando la moción que el Sr. García Alix había hecho a las Cámara, trajo aquí un proyecto de ley para esta defensa. Antes, y formando parte de una Comisión de la Academia, tuve yo el gusto de hablar del asunto con el Sr. Domínguez Pascual, que nos excitó a que le hiciéramos presente nuestras ideas y deseos en esta parte, para ver de comprenderlas en el proyecto de ley, y recuerdo muy bien que en aquella reunión tuve el gusto de manifestarle que lo esencial para mí, era separar la propiedad pública de la privada, la colectiva de la particular; que en el primer punto el Gobierno tenía amplias facultades, mayores derechos y aun quizás mayores obligaciones, y que en lo que tocase a la propiedad particular, habría que andar con mucho cuidado y con mucho tiento, pues la propiedad particular, aunque se refiera a materia artística, es sumamente respetable y delicada. Vino, en efecto, aquel proyecto de ley presentado por el Sr. Domínguez Pascual, y de la Comisión que se formó para entender en él formó parte el Sr. Nieto (...) pero desgraciadamente aquel proyecto, aunque aprobado por el Senado, quedó pendiente de votación definitiva, porque se opuso a ello algo de que no he de hablar, ya que es sabido de todo el mundo*<sup>2644</sup>. Aludió a la necesidad de implantar un derecho de tanteo por parte del Estado, imitando a la legislación italiana, como había ocurrido en el proyecto presentado por Casas-Valencia: *Posteriormente, el Sr. Conde de Casa-Valencia reprodujo en otra legislatura o en otras Cortes, que esto no le recuerdo bien ahora, aquel proyecto ya aprobado en el Senado, y los amantes del arte y los que como yo, aunque inmerecidamente, formamos parte de aquella Comisión, tuvimos la satisfacción de ver que el proyecto se aprobó. Aquella Comisión puede decirse que limó las asperezas que tenía el primer proyecto, y ateniéndose a lo que la ley italiana había hecho, se estableció el derecho de tanteo, derecho que no implica de ninguna manera atentado a la propiedad particular, sino que, antes al contrario, puede decirse que resulta beneficioso para la misma propiedad particular. Aquel proyecto fue aprobado por el Senado en primera votación y definitivamente, pasando al Congreso, y por causa que ignoro no salió de la otra Cámara*<sup>2645</sup>. Su interpelación concluiría defendiendo la necesidad de promulgar una ley que recogiera el espíritu de los proyectos anteriores: *Murieron aquellas Cortes, y estábamos sin ley en lo a que esta materia se refiere, cuando ahora, con motivo del lamentable suceso difundido por todas partes, se ha comprendido que era necesaria alguna mayor defensa que la que llevan consigo las disposiciones antiguas citadas por el Sr. Ministro de Instrucción Pública, y que en efecto, existen, porque el Poder Público español no ha dejado de considerar este asunto como de gran importancia y lo ha mirado con el interés que lo hacen otras Naciones donde se tienen en más estima las obras de arte, y comprendiendo, digo, que esas disposiciones acaso no son*

---

<sup>2644</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, 22 de octubre de 1907, p.1490.

<sup>2645</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, 22 de octubre de 1907, p.1491.



*bastantes y necesitan sobre todo que tengan fuerza de ley, el Sr. Ministro de Instrucción Pública tuvo la bondad de decir que el Gobierno estaba dispuesto a reproducir ese proyecto en la forma que tenía o como mejor se estimara. Después las Cámaras lo discutirán y trabajarán con todo detenimiento, y de la discusión que aquí y en el Congreso ha de tener efecto, resultará, creo yo, algo que podrá ser conveniente y yo entiendo necesario. (...) El alcance de este proyecto puede tener su eficacia, no sé cual, será alguna puede ser, aunque por completo acaso no se logre, pues la misma Italia no lo haya conseguido totalmente (...)*<sup>2646</sup>.

El nudo de la cuestión que se estaba debatiendo en la Cámara a la hora de promulgar una nueva ley de antigüedades lo volvería a referir el propio Ministro de Instrucción Pública, y era el específico carácter jurídico que podían tener los bienes artísticos, que los haría limitarse en el tráfico mercantil. La intervención de Rodríguez San Pedro cuestionando este hecho y apostando claramente por el libre tráfico de las obras de arte, como bienes mercantiles, siguiendo el espíritu liberal que se estaba imponiendo en estos años sería la tendencia que se estaba defendiendo por parte de la mayoría de los senadores de la Cámara: *A saber; si las obras de arte, por ser obras de arte y para conservarlas indefinidamente, han de estar fuera del comercio humano. Esta es realmente la cuestión. Los que exageran, pretenden que, por ser obras de arte, están fuera de todas las leyes civiles, están como vinculadas a la gloria nacional, y a semejanzas de aquellos otros vínculos de familias, se hacen inalienables, y no hay que examinar si una enajenación se verificó de una u otra suerte, por uno u otro procedimiento, con uno u otro permiso, sino que, por haber enajenación, es ya ilícito (...) Iremos también al culto, pues hay dos cultos que están aquí juntos, el uno es el religioso y el otro es el artístico, y por el culto artístico se quiere hacer algo que semeje al culto religioso, y así como se dice que los objetos de culto religioso, mientras no pierdan ese carácter, están fuera del comercio de los hombres, porque realmente produciría escándalo que mientras una cosa está consagrada públicamente se vendiera, así se quiere decir también que lo que están entregado al culto de los artistas, de los críticos o de los que sienten amor entrañable a las obras de arte, está fuera del comercio y no hay enajenación posible sobre aquello. Es evidente que desde el momento que se plantea la cuestión de esta manera, hay que adoptar uno de los dos temperamentos. ¿Es que debe prohibirse toda enajenación de obras que sean de arte? ¿Es que ese género de obras está fuera del comercio de los hombres? Me parece que todos contestarían unánimemente que no. Aquello que está fuera del comercio de los hombres no hay que esperar que se fomente (...) El mejor medio de matar el arte, sería declarar las obras artísticas en esa condición. Si la obra de arte podía ser traficada, por lo que también tenía un carácter mercantil, el debate se centraría ahora en si podía ser establecidos algunos límites de este comercio, especialmente los referentes a la exportación, no por una hipotética naturaleza jurídica de los mismos, sino porque sería establecida por una ley: (...) Desde el instante en que eso sucede, la única cuestión que aquí cabe ventilar es si ha de ser un comercio libre o sujeto a determinadas condiciones; pero esas condiciones no las da su naturaleza, las dará la ley (...). Sin embargo, esa ley tendría que solventar el*

<sup>2646</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, 22 de octubre de 1907, pp.1492.

problema de un posible carácter confiscatorio de los bienes: *Es más, yo en la otra Cámara he ofrecido en nombre del Gobierno que habrá esa ley (...) pero una ley prohibitiva de toda enajenación de obras de artes, por serlos, sin compensación de ningún género, eso no, porque eso sería tanto como la confiscación de todos los bienes de los españoles, con tal de que se les calificase de obras de arte, y a esa monstruosidad, no creo que llegaría el Senado, ni el Congreso, ni menos llegaría el Gobierno a proponerlo*<sup>2647</sup>. El Obispo de Madrid-Alcalá defendería a su vez la potestad eclesiástica sobre el tráfico de bienes eclesiásticos de interés histórico-artístico así como subrayaba que éstos no tenían que ser inalienables: *Para vender un objeto de arte si es propiedad de la Iglesia, se requieren las condiciones siguientes: primera, que se diga el objeto que se necesita vender; segunda, que se razone con fundamentos legítimos y en verdad la necesidad causa de la venta; y tercera, que siga, con el dictamen de personas peritas, el valor del objeto que se trata de vender.*

El 30 de octubre de 1907 el propio Conde de Guendulain comparecería en el Senado con el propósito de explicar porque se había procedido la venta de los cuadros de El Greco, y los derechos que tenía inherente a su calidad de patrono de la fundación. Después de explicar cómo su propio padre había adquirido el patronato tras un largo pleito, se refirió al déficit que tenía la propia Capilla fundacional, por lo que pensó que podría vender algunos de los cuadros de El Greco que poseía la institución fundacional, consiguiendo para ello la autorización pontificia: (...) *A pesar de la suma el déficit existía, y entonces cumpliendo mis deberes como patrono (pues siempre he actuado como patrono, jamás he actuado como propietario) (...) requerí a Su Santidad para que me dijera lo que tenía que hacerse en este caso (...) condodándome del cumplimiento de las cargas que aun quedaban indotadas, pero rogándome que en el mismo momento en que yo pudiese obtener recursos de otra índole (...) los dedicase inmediatamente al cumplimiento de las cargas fundacionales de la Capilla de San José, de Toledo (...) En este estado (...) me dediqué a buscar el medio conducente para reunir fondos y llegar a completar el cumplimiento de dichas cargas fundacionales. Muy pronto comprendí que el único recurso era intentar la enajenación de alguno de los cinco cuadros del Greco allí existentes (...) el año pasado se me ofreció por una casa francesa de gran seriedad, adquirir los cinco cuadros de El Greco (...) me fijé en dos cuadros colaterales, calculando que con su enajenación podía atender a las cargas de esa capilla, y por esa razón decidí venderlos, pero no sin antes obtener la sanción del Nuncio apostólico, condición que yo puse para la venta (...) pero me entenderé al mismo tiempo, de que el Gobernador Civil de Toledo se le había transmitido un telegrama diciendo que impidiera la salida de esos cuadros hasta nueva orden (...) Entonces en el acto, formulé una enérgica y documentada reclamación al Sr. Ministro de Gobernación, que lo era el Sr. Conde de Romanones (...) En esta situación, y estaba ya para resolver el expediente, vino un cambio político y obtuve las dos Reales órdenes declarando el Gobierno que ni la*

---

<sup>2647</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión del martes 22 de octubre de 1907, pp.1495-1496.

*Beneficencia Pública ni el mismo Gobierno podía inmiscuirse en una fundación llamada de sangre, o sea particular, que no había más que la autoridad eclesiástica, es decir Roma, para intervenir en ella, y por eso me dirigí de nuevo al Nuncio por conducto del arzobispo de Toledo y, en efecto, obtuve la sanción y aprobación del proyecto de venta (...)*<sup>2648</sup>. Nuevamente el Ministro de Instrucción Pública defendería la actitud tomada tanto por el propio Conde de Guendulain como por el poder público: *¿Qué ha habido en este asunto? Una detención momentánea de objetos que se creía S.S. con perfecto derecho a disponer. Y protestando como todos nosotros hubiéramos protestado enérgicamente contra lo que consideraba una medida arbitraria, acudió primero al Gobierno de S.M., representado por el Ministerio de Gobernación, para que aquella arbitrariedad, si era tal, desapareciera(...)* Su señoría ha declarado que no encontró obstáculo en aquel gobierno para que inmediatamente se tomara en consideración sus reclamaciones (...) *Y el digno Sr. Cierva, Ministro de la Gobernación actual, concluyó el expediente, reconociendo justa las reclamaciones y dictando una disposición en la que se manifestaba que él no se oponía a que S.S. usase su derecho (...)* Había la circunstancia de que aquella orden había sido dada, no por el Ministro de Gobernación, sino por el subsecretario de Instrucción pública(...) por eso acudió a este centro (...) y yo tuve entonces ocasión de examinar esos documentos, y encontré que una por una serie venía en la familia de S.S. asentado el perfecto derecho a disponer de aquellas cosas sobre las que reclamaba su libertad (...) <sup>2649</sup>.

La réplica de algunos senadores no se haría esperar; así el senador Aramburu nuevamente exponía la especial naturaleza jurídica que tenían estos bienes a pesar de pertenecer aparentemente al dominio privado: *Se trata de algo que es una gloria de la Patria, de algo que significa que este pueblo, que parece muerto, se conmueve un poco cuando se despoja a un altar, donde acaso todavía flotan sus propias oraciones (...)* Hay que hablar, hay que decir mucho sobre esto, sin negar, como totalmente se ha negado por escuelas filosóficas y científicas, que el Estado tiene una alta inspección sobre esas grandes cosas que los particulares pueden creer como completamente suyas. Pues ¿por qué se expropia a un particular cuando hay una causa de utilidad pública, cuando hay una necesidad urgente de servicio general que así lo exige? ¿Por qué tiene tantas limitaciones el dominio?<sup>2650</sup> Torno por su parte fundamentado en el derecho vigente apuntaba que *Nunca las capillas y los objetos que en ellos se contienen, y mucho menos aquella parte incorporada al inmueble por adhesión, como eran estos cuadros que formaban parte del retablo y estaban incorporado a lo sagrado del altar por la dedicación y la consagración. Es verdad, sin embargo, que cuando la Iglesia se arruina y el patrono no puede subvenir a la reedificación y la autoridad eclesiástica, unas veces libremente y otras con la intervención de la autoridad civil, no prevé tampoco a la reedificación, lo que queda de la ruina se ha podido recobrar y se ha recobrado*

<sup>2648</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.82, Sesión de 30 de octubre de 1907, pp.1613,

<sup>2649</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.82, Sesión de 30 de octubre de 1907, pp.1613-1614.

<sup>2650</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.82, Sesión de 30 de octubre de 1907, p.1615.

*legítimamente por los patronos (...) Este no es el caso de la Capilla de San José, de Toledo; éste vive, la fundación de la iglesia subsiste, y por lo tanto, no ha podido haber derecho en el patrono a tomar parte del inmueble y ponerlo en el comercio de los hombres. Y como esta legislación que se refiere a la propiedad eclesiástica está vigente con sanción civil, entiende que el derecho del patrono no ha tenido existencia. Ha podido haber (...) indulto apostólico de carácter excepcional; todavía lo habré de suponer solicitando claramente, no para vender objetos, sino para vender parte del inmueble y parte del altar –pues pudiera darse diferencia entre una y otra cosa-*<sup>2651</sup>. El debate se centraría en la naturaleza jurídica de los bienes de interés religiosos y en la libre disponibilidad de enajenación. Así en la Sesión del 8 de noviembre de 1907 en el senador Cortezo volvería a cuestionar el régimen patrimonialista de los patronatos y capellanías: *¿Cree el Sr. Ministro de Gracia y Justicia que los bienes de patronatos y capellanías, los objetos, así sagrados como profanos, perteneciente a la Iglesia, a que estas capellanías son anejas y de la Iglesia misma, constituyen una propiedad particular de los patronos, que han sido en ellas reintegrados, y en su enajenación absolutamente incondicionada, no tiene para que intervenir las autoridades? No se trata en especial de obras de arte, no; hablo sencillamente de los objetos de estas capellanías y patronatos. Una segunda cuestión estaría centrada en la limitación que tendría que tener la propia Iglesia en la disposición de sus bienes: ¿dada la enumeración dolorosísima a que vengo haciendo repetida alusión, que durante esta discusión se ha hecho de los objetos de arte enajenados, casi todos ellos pertenecientes a patronatos, casi todos ellos pertenecientes a Catedrales, a Cabildos, a Congregaciones, que vienen haciendo que se merme tan considerablemente el patrimonio artístico del país (...) Porque la venta, porque la exacción, porque la enajenación indebida son tan numerosas (...) sin que yo sepa que esto se hacía con el permiso canónico y singularmente sin el conocimiento del Real patronato (...)*<sup>2652</sup>. Para ello reclama un convenio con las autoridades eclesiásticas, e incluso dejar vigente la ley de 1869 limitando la disposición de obras de arte: *Cree S.S. que no habría alguna manera, con una disposición emanada de su Ministerio, con un concierto hecho con las autoridades eclesiásticas (...) o en último resultado acudiendo a cierta ley del Reino (...) que es la de 1º de enero de 1869, que no está derogada, que yo sepa, por disposición ninguna posterior?* Su intervención finalizaría refiriéndose a la frustración que había significado los fallidos proyectos de ley del patrimonio monumental: *Si nosotros dejamos la discusión en los términos en que quedó en ambas Cámaras, aquí no ha pasado nada, aquí no se tomará ninguna medida, porque lo único que aquí hemos oído que abre algún camino a la esperanza es la promesa del Sr. Ministro de Bellas Artes de que traerá a las Cámaras, bien al Congreso, bien aquí, un proyecto de ley para evitar la venta de las obras artísticas, para evitar la salida del país de estas obras, y ya sabemos el destino que a este género de proyectos está reservado*<sup>2653</sup>.

---

<sup>2651</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.82, Sesión de 30 de octubre de 1907, p.1617.

<sup>2652</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.88, Sesión de 8 de noviembre de 1907, p.1701.

<sup>2653</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 8 de noviembre de 1907, Núm.88¿?, p.1702.

El Ministro de Gracia y Justicia, el Marqués de Figueroa, replicaría al senador definiendo el distinto régimen patrimonialista de estos patronatos: (...) *sobre la legislación de estos patronatos, tan variados en su carácter y condiciones. De suerte que siendo tan grande su variedad (...) porque estos patronatos, o bien tienen un fin principal de beneficencia, y están más al alcance del Poder Civil, o bien tienen carácter religioso, y entonces son más bien las disposiciones y censuras eclesiásticas las que habrán de aplicarse, examinando si se tratan de bienes de libre disposición, que como tal los considere tal legislación, o si trata de objetos de culto que están espiritualizados y que necesiten, por lo tanto, el permiso de las autoridades en el orden jerárquico de la Iglesia para que la venta tenga lugar, todo esto ocasiona diversidad de accidentes, según los casos que se ofrezcan y según la naturaleza de los patronos, y son los que desde el momento que están más sujetos a estas disposiciones eclesiásticas, los eclesiásticos no pueden llegar a la venta de ellas si son objetos espiritualizados, como lo son estos objetos artísticos, por ser objetos dedicados al culto, como cálices, reliquias y cuadros, en que coinciden el fin artístico y el de devoción, y las disposiciones de carácter eclesiástico, son los que principalmente se oponen a que puedan ser enajenados. Apuntaba al mismo tiempo la cooperación de las autoridades eclesiásticas: (...) todo esfuerzo debe aunarse, a unirse a aquel otro esfuerzo de las autoridades eclesiásticas (...)*<sup>2654</sup>. La respuesta de Corteso se centraría en el carácter sacralizado de estos cuadros que de ninguna manera podían ser vendidas: *no son objetos consagrados, no son objetos espiritualizados los retablos mismos delante de los cuales se verifica el sacrificio de la misa y delante de los cuales comulgan los fieles? Por ventura ¿no son estos cuadros objetos consagrados? Pues eso son los cuadros arrancados y vendidos (...) Los cuadros vendidos eran objetos espiritualizados, consagrados, que formaban parte integrante de la capilla de San José de Toledo, y lo que deseo es que esas declaraciones no se generalicen para otros patronos y para otros objetos semejantes*<sup>2655</sup>.

El eco de la discusión de las Cortes sobre la venta de los Grecos se vería nuevamente reflejado en la prensa del momento, mostrando el rechazo que la propia opinión pública estaba mostrando por la pérdida de dichas obras artísticas. De esta manera Julián Besteiro escribiría en el periódico El País el 22 de mayo de 1908 un artículo con el título los nobles prenderos, mostrándose muy crítico con los poderes gubernamentales, la aristocracia y la propia jerarquía eclesiástica. Responsabilizaba al Gobierno de la pérdida de estas obras *no solo por haber impedido que los lienzos salieran del lugar para el cual los pintó su autor, sino también por haber hecho, hasta ahora, nada para recuperarlos. Porque es posible todavía recuperar esos cuadros*, criticando al mismo tiempo la actitud del propio arzobispo de Toledo, quien ha *dado permiso en el que pretende basar el conde Gundelain su derecho a la venta de esos bienes pertenecientes a una fundación de la cual es patrono y del Ministro de Instrucción Pública que había defendido en las Cámaras el pretendido derecho del conde, negado*

<sup>2654</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 8 de noviembre de 1907, Núm.88, p.1703.

<sup>2655</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 8 de noviembre de 1907, Núm.88, p.1705.



*por diputados y senadores de todos los matices y hasta por obispos. La desesperanza tiñería el final del artículo*<sup>2656</sup>.

### **3.5. Un artículo de la revista Forma de 1907, reclamando una ley de exportaciones.**

En las revistas de crítica de arte se estaban poniendo las bases de una concienciación pública de la intervención administrativa sobre el control de la exportación de las obras de artes. Comenzaba el artículo describiendo la pérdida patrimonial que había ocurrido en nuestro país desde el siglo XVIII: *La corriente de expediciones que despoja nuestro territorio de las obras de arte antiguo que forman el tesoro nacional, no ha sido detenido ni un momento desde la postrimería del siglo XVIII. De tarde en tarde un hecho conocido de todo el mundo da una luz especial a esta pacífica expoliación y entonces durante unas semanas se oyen autorizadas increpaciones llenas de respetables indignación, proyectos generosos de leyes draconianas y hasta los parlamentos se emocionan ante la falta de antecedentes de unas obras de arte de las que solamente hablan libros extranjeros o para extranjeros. Una vez, es la Ascensión del Greco, otro, son dos Grecos más de Valladolid; ahora el turno ha sido para otros Grecos, procedentes de la capilla de San José de Toledo. Y nuevamente se planteaba hasta qué punto el pretendido derecho de la propiedad privada era un obstáculo en el camino de la regulación de una verdadera tutela pública del Patrimonio Monumental: La cuestión ha quedado netamente planteada, sobre el indebido derecho de propiedad de un señor conde y el derecho de una junta de obra o cofradía que no se cuidaba de sus intereses morales ni materiales, según demuestran los hechos. En el primer caso, nada más sencillo que hacer devolver las obras a sus primitivos sitios de exposición; o en segundo caso, es bastante garantía el que una junta de obra posea unas obras de que no puede vender según la ley, cuando tantos en parecidos casos han abandonados los templos para los que fueron concebidos? ¿La admirable alfombra de Guadix, los ya citado Grecos de Valladolid, el frontal de San Cugat de Vallés y tantos otros centenares de cosas artísticas donde están?. La discusión se plantea siempre con leyes viejas en las manos o con leyes nuevas en proyectos, pero la situación del lugar adonde se aplica o quiere aplicarse la ley, es siempre invariablemente nuestra frontera. Nosotros también por ella empezaríamos las medidas adecuadas para dificultar la salida de nuestras obras de arte antiguo, pero siguiendo un sistema lógico y por este mismo motivo, difícil de plantear, dada la costumbre de legislar todos, o cualquiera de todo o de lo que se presente. Y procediendo por partes, la primera ley que debía votarse –según el parecer de muchos coleccionistas y de los que por sus trabajos y sacrificios han instalados verdaderos museos públicos y privados, de los que negociando en la compra y venta de aquellos objetos los ponen a nueva luz y les dan un valor venal desconocido,- la primera ley que debería votarse, es de procurar aumentar el número de objetos de arte que posee la Nación. Esta proposición que parece una extrañeza, se explica clarísimamente por el hecho siguiente: hoy, los tapices, esmaltes, marcos antiguos (de talla y dorado), cerámica, las joyas, las esculturas de mármol, madera, alabastro y de todo otro material, en una palabra: todos los objetos de arte antiguo, de producción española o extranjera,*

---

<sup>2656</sup> BESTEIRO, Julián “Los nobles prenderos”, *El País*, 22 de mayo de 1908. El artículo está citado en

*provenzan de donde quieran y estén en el peor mal estado, pagan derechos de arancel, que si no son iguales a los de los objetos nuevos, son en todo caso bastante importantes para dar lugar a totalizaciones de millares de pesetas, según partidas satisfechas que hemos tenido ocasión de examinar. Y aquí, es indispensable asegurar, que contra lo que parece, es España cada día mayor el mercado de objetos de arte adquiridos al extranjero, ya que variando de manos las fortunas, los nuevamente enriquecidos, si quieren antigüedades artísticas, deben comprarlas y haciéndolo generalmente sin tacto, siguen más los gustos de París, de Londres, de Viena o de Munich, que están tan acreditados como en las demás cosas en que los españoles gastan sus capitales en el extranjero. Pues habiendo españoles que compran obras de arte en el extranjero, no es la primera medida de abrir las puertas a las muestras de arte que deben influir en la cultura general? No creemos que la honrada clásica de los falsificadores, tenga la pretensión de invocar un arancel protector, por más que no dejaría de moverse para conseguir tal fin. Una vez obtenida esta libre importación de antigüedades verdaderamente artística, bajo la garantía de inspección, se podría pensar en reglamentar la salida, no prohibiéndolo de momento, sino empezando por saber lo que ahora ignoramos: que poseemos, que valor intrínseco probable tiene y a quien pertenece con absoluta seguridad; para establecer este Catálogo, debía procederse a tantos requisitos prácticos como para la dirección de un gran museo; el Catálogo de la riqueza artística de un país, no se hace como el catastro, o como las oposiciones a una cátedra de las de vida resignada. El Estado debía preocuparse no solo de que las obras no saliesen, sino sobre todo, de que se acrecentase el patrimonio nacional y para ello debían de comenzar por proteger a los coleccionistas eliminando los aranceles que pesaban sobre la importación de las obras de arte. Una vez obtenida la libre importación de obras de antigüedades, se podría pensar en reglamentar la salida, no prohibiéndola de momento, sino empezando por saber lo que ahora ignoramos (...).*

### **3.6. El Proyecto de Real decreto de 22 de enero de 1908 de Rodríguez San Pedro: la impronta de la ley italiana de 12 de junio de 1902.**

El proyecto de Rodríguez San Pedro que presenta el 22 de enero de 1908, formado por una exposición de motivos, y diecinueve artículos, es la más cercana a la ley italiana de 22 de junio de 1902, hasta el punto que copia directamente algunos de sus preceptos, aunque en conjunto era menos intervencionista, incorporando elementos del proyectos que había preparado Gimeno. En sus disposiciones se encuentran ya algunas medidas progresistas como el nuevo papel que se le asignaba a la Real Academia de San Fernando y el Cuerpo de Archiveros como órganos consultivos para dictaminar el valor artístico de la obra; la asignación del Estado de 250000 pesetas para la adquisición de obras que se fueran a exportar; la obligación de acudir al Estado cuando se fuera a exportar una obra, teniendo el ejercicio de tanteo, fijándose un plazo de tres meses, incluso para las obras de los particulares, al igual que para las entidades públicas y la Iglesia. Al mismo tiempo se abría un Registro de obras artísticas y arqueológicas de interés nacional, que comprenderían las de propiedad estatal, siendo de carácter voluntario las de propiedad privada. Al

igual que la legislación italiana quedaría exentas aquellas obras que fueran de autores vivos y los que no tenían una antigüedad de cincuenta años<sup>2657</sup>.

En la Exposición de Motivos Rodríguez San Pedro se lamentaba del parco resultado que había tenido hasta este momento del gran número de disposiciones legislativas que había sido promulgado en España sin un resultado claramente favorable, por lo que se había prolongando a pesar del esfuerzo legislativo la pérdida del Patrimonio Monumental: *Las sensibles desmembraciones que ha sufrido en varias ocasiones la riqueza artística nacional, sin que el Estado pudiera cosa distinta que asociarse al general lamento de las personas cultas y entendidas en la materia, han dado origen a diversas disposiciones ministeriales y proyectos de ley, encaminados a la conservación dentro de España de aquellas obras que por su alto valor artístico o arqueológico, o por hallarse de algún modo enlazadas a recuerdos de sucesos históricos memorables, merecen formar parte del patrimonio nacional. Ni las disposiciones publicadas en la Gaceta han sido suficientes a impedir que se mermen los tesoros artísticos de que podemos en España envanecernos, ni los proyectos de ley encaminados en el propio sentido, con mayor amplitud, lograron tampoco la eficacia deseada, puesto que por diferentes razones fueron convertidos en precepto. Nuevamente va a primar en el espíritu de la ley la defensa del equilibrio entre el derecho de la propiedad privada y el interés general del Estado, para lo que parafraseando el contenido de la Exposición, ha cuidado especialmente de que el Estado tenga medios positivos y reales de impedir la exportación de las obras artísticas y arqueológicas, sin que resulte desconocida en ningún caso la propiedad privada, ni tampoco estimulada la codicia, que pudiera intentar aprovecharse, mediante exageradas valoraciones del natural y público deseo de que no pasen la frontera para enriquecer los Museos y colecciones extranjeras obras de arte que forman parte del gran acervo nacional, haciendo alusión a los intentos frustrados que habían representado los proyectos de Ley de 7 de diciembre de 1900 y 23 de junio de 1904, como las leyes que, inspiradas en los mismos deseos, rigen en otros países.*

Un gran número de disposiciones que aparecían insertado en el articulado repetía literalmente el proyecto de ley anterior, como el deber que se atribuía al Estado sobre la conservación de las obras de arte, su exhibición pública y su prohibición de exportación (art.1), la definición de obras artísticas y arqueológicas, marcada por la heterogeneidad de bienes, tanto muebles como inmuebles, entre los que se encontraba los monumentos arquitectónicos, esculturas, pinturas, grabados, dibujos, cerámicas, vidrios, medallas, inscripciones, monedas, tapices, telas, trajes, armas, instrumentos, libros, códices, manuscritos, a los que se unirían los monumentos conmemorativos de hazañas nacionales (art.2), y la distinción tutelar de los bienes de las instituciones públicas y la de los particulares, que prácticamente reproducía literalmente el proyecto de ley anterior, por lo que en el caso de los

---

<sup>2657</sup> ALVAREZ LOPERA, “Coleccionismo, intervención estatal y mecenazgo en España (1900-1936): una aproximación”. *Fragmentos*, Revista de Arte, Núm.11, 1987, pp.42-43.

Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y los establecimientos públicos de enseñanza o beneficencia, las Academias y demás Centros y Corporaciones de carácter oficial, en cualquiera de sus grados, que pretendiera vender o enviarla fuera del territorio nacional algunos de sus bienes, tendrían que ser autorizado por el Ministerio de Instrucción Pública, acreditando, que no estuviesen obligados a conservar dicha obra y pudiesen disponer libremente de ella, expresando las causas que motivaran su determinación (art.3), medida que se repetía en el caso de los bienes pertenecientes a los Cabildos Catedrales, Colegiatas, iglesias, parroquias, conventos y demás institutos religiosos, que solamente podrían venderlos en el caso de que tratasen de transmitir la propiedad de alguna obra artística o arqueológica, o de llevarla fuera de España, dándole la intervención en el expediente a la Autoridad eclesiástica, y no otorgando la licencia pedida sin previo acuerdo entre ambas potestades (art.4), y en los bienes de las Asociaciones de índole privada, que estuviesen protegidas más o menos directamente por el Estado con subvenciones o en otras forma cualquiera, estando sujetas a la expropiación forzosa, a no ser que, renunciando con anterioridad a la protección oficial, recobren su carácter puramente privado (art.5). La libre disposición de los bienes de los particulares y las Asociaciones de carácter privado volverían a estar limitado por la tutela pública, pues aunque podrían venderlas en el interior del territorio nacional, no podrían exportarlas sin la autorización del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, previo informe de las Reales Academias (art.6.1). Nuevamente sería atribuido al Estado el derecho de tanteo y retracto, *cuando la Corporación informante, atendiendo al mérito y al precio de la obra, estimará que ésta no debe de salir de España, el Gobierno la adquirirá, o acudiendo a su expropiación cuando no constare su precio en forma suficiente, haciendo una u otra cosa en el término de noventa días* (art.6.2).

La elaboración de un Registro de obras artísticas y arqueológicas de interés nacional, con sucursales en todas las provincias, que había sido contemplada en el Proyecto de 1906 se volvía a reproducir (art.9), siendo obligatorio para las Corporaciones y Centros relacionados con el Estado, y voluntario para los particulares y Asociaciones puramente privadas (art.9.2), contemplándose la presunción de propiedad de toda persona o colectividad que apareciera inscrito en el Registro como dueño de una obra, mientras no hubiese prueba en contra (art.9.3). Como novedad se establecía que en para las Corporaciones y Centros relacionados con el Estado, para lo que era obligatorio el registro de sus obras, tendrían que formar el inventario de los bienes dentro del término de seis meses, contando desde la promulgación de la ley, para lo que sería remitido al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes un ejemplar, debidamente autorizado, no pudiendo desmoronarse esta formalidad más de quince días después del expresado término. Si quedase sin cumplir esta obligación, el Ministerio podrá disponer que se forme aquel inventario a expensas de la Corporación o Centro que hubiese incurrido en la

demora (art.10.2). A pesar del carácter voluntario a la hora de elaborar el Registro por parte de los particulares y asociaciones privadas, se introducía como novedad que el Gobierno podría incluir algunos de sus bienes que considerase oportuno y que estuviese comprendido en la disposición del artículo 2º, para lo que se notificarían a los dueños en un plazo que no podría pasar de quince días, con el solo objeto de su conocimiento para cuanto pueda convenirles (art.10.3). Como novedad legislativa se establecía la implantación de una tasa equivalente al 15 por ciento del valor que resulte de la declaración o documentación con que ha de ir acompañada su expedición, para la salida al extranjero de cualquier objeto de arte y de antigüedad; salvo los comprendidos en el precedente artículo 12 (art.13.1), así como el derecho que tendría el Gobierno de adquirir el objeto que se quiera exportar al precio fijado de aquel modo, deduciendo de él la cantidad del derecho de exportación (art.13.2). De la misma manera el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes podría autorizar la exportación temporal de obras artísticas o arqueológicas para certámenes o exposiciones, sin pago de derechos, previo al favorable informe de la correspondiente Corporación facultativa, siempre que se estableciera las garantías necesarias de su entera conservación y de su reintegro seguro al territorio nacional (art.14).

Nuevamente se contemplaba la regulación jurídica de las excavaciones arqueológicas que habían aparecido en el proyecto de Ley de 1906, por lo que se prohibía hacer excavaciones en terrenos de dominio público o del Estado sin autorización del Gobierno, que sólo la otorgaría mediante la cesión de la mitad de cuanto se encuentre, tomadas en cuenta la cantidad y la calidad, con destino a los Museos Públicos (art.15.2), mientras que los terrenos de propiedad particular aunque se autorizara, sería preciso que sus dueños dieran al Gobierno cuenta de que iban a practicarlas, sometiéndose a su vez a su inspección, en caso de que por las investigaciones o datos científicos supusiera o resultase la existencia de objetos de alto interés histórico (art.15.3), contemplándose a su vez la expropiación de aquellas fincas que fueran necesarias para practicar en ella excavaciones, en caso de los dueños se hubiesen opuestos a que se realizasen en ellas las correspondientes excavaciones arqueológicas, para lo que transmitiría el expediente para la previa declaración de utilidad pública que sólo podrá decretarse por acuerdo legislativo (art.15.4). Los objetos que habían de ser exportados debían de entregarse previamente una reproducción en vaciado o en fotografía, según los casos (art.15.5). Una limitación de la disposición libre del uso por parte de los propietarios privados de los inmuebles de interés histórico y artístico lo representa la inclusión del artículo 16, al ser prohibida la demolición, reforma o reparación, los bienes que estuviesen comprendidos en el artículo 2º, sin formar ante los proyectos oportunos y obtener para éstos la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, mediante el Informe de las Reales Academias (art.16). Sin embargo, dejaba una excepción discutible, que el propietario podría demoler, reparar o



reformular el inmueble en caso *de extremada urgencia para evitar su desaparición*, que desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones se convirtió en una verdadera salida en la libre disposición del propietario. Al igual que en el Proyecto de 1906, se establecería un procedimiento sancionador para aquellas Corporaciones y particulares que infringieran las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley, con una multa de 100 a 500 pesetas, si conforme a otras leyes no mereciesen mayor pena (art.17). Al mismo tiempo era contemplando una asignación presupuestaria anual, concretamente, la suma de 250.000 pesetas destinadas a la adquisición de obras artísticas o arqueológicas de interés nacional, excavaciones y a la instalación de Museos, siempre que resulte algún sobrante de la adquisición de las obras artísticas y de las excavaciones, sin perjuicio de la cantidad destinada o que se destine a la conservación de monumentos (art.18.1). Se incluía como novedad la elaboración de un fondo o crédito permanente que estuviese constituido con los productos del derecho de exportación que había ido establecido en el artículo 13, y que serían destinado a los mismos fines que los presupuestos consignados (art.18.2). El Dictamen sería presentado el 15 de octubre de 1909, cuyo contenido constaría del mismo articulado que el proyecto de ley presentado en el Senado. El senador José Herrero presentaría unas enmiendas al dictamen del proyecto de ley, el 4 de mayo de 1909, concretamente en el artículo 2º, por el que incluía a las alhajas, como objeto de tutela monumental, y al artículo 8º, respecto a las medidas sancionadoras, por el que se dispondría que Las Corporaciones o particulares que infringiesen los preceptos procedentes serían castigados con la incautación del objeto, que podría ser destinado a uno de sus Museos, y una multa que en ningún caso podría exceder del duplo del valor del objeto incautado.

### **3.7. La reiteración del debate sobre la exportación de la obras de arte en las sesiones de Cortes a finales de 1910.**

El discurso de Emilio Tormo del 25 de noviembre de 1910 vuelve a ser un exponente del diferente exponencial entre aquellos bienes artísticos que pertenecían a la plena propiedad de un particular de aquellos que formaban parte de una institución, tanto religiosa como civil: (...) *hasta qué punto es necesario que no olvide la tramitación, no diré ciertamente fácil, de un proyecto de ley, que creo que debía reproducirse en estas Cortes, referente a la conservación en general, y en particular para España, de los tesoros artísticos, especialmente, en mi opinión, de aquellos que no están en la plena propiedad privada. En cualquiera especie de propiedad pública, sin embargo, patronatos, iglesias, monasterios, ayuntamientos, etc., ya no puede reconocerse la misma libertad absoluta de enajenación que, según las doctrinas corrientes, tiene la plena propiedad privada. De un modo o de otro, lo que yo quiero y suplico es que se de estado parlamentario a un proyecto de ley (...) para hacer conseguir que España tenga aquellos que tienen todas las Naciones que se preocupan del tesoro espiritual, para llegar a la satisfacción y cultura de sus habitantes, y no para una subasta o enajenación (...) precisamente uno de los elementos de más autoridad en España de la cultura intelectual, pero a la vez*

*de principios jurídicos más rígidos en cuanto al derecho de la propiedad, el Sr. Saavedra, que ha sido ilustre director de la Real Academia de la Historia (...) me habló que se volviera a presentar el proyecto de ley, en la forma que lo había acordado la Comisión, salvando sobre todo, los respetos de la propiedad privada (...) la extraordinaria diferencia que hay entre las colecciones artísticas formadas con grandes desembolsos, por lo que tienen afición a estas cosas, de aquellas obras artísticas que todos los días están saliendo de un acervo en realidad colectivo, como son las fundaciones, las instituciones de la Iglesia, etc.(...) Respeto de esta clase de objetos, que no son de estricta propiedad privada, yo creo que la ley sería aceptada por la Cámara, así como creo difícil coartar la facultad de enajenar los objetos que figuran en una colección. La defensa de la propiedad privada se vuelve a reiterar en la intervención de Rodríguez San Pedro: (...) el proyecto de ley que con tanta justicia reclama el Sr. Tormo (...) que yo tuve el honor de traer a la Cámara (...) no se violentaba, absolutamente ningún derecho; se respetaban todos y se tenían en cuenta la situación, que podía ser muy delicada, en que cabía se encontrasen muchos objetos de arte que pertenecen a eso que podemos llamar patrimonio espiritual de la Nación. Y en cuanto a la propiedad particular, había un respeto absoluto para la misma, y se dejaba a la iniciativa de los poseedores de los objetos del arte el iniciar, puesto que era una iniciativa suya, el iniciar la enajenación o no enajenación de esos mismos objetos. Claro que cuando el Estado tomara parte en el asunto, tenía que abonar una indemnización cumplida de aquel derecho de que se creía despojado el mismo propietario, y por tanto, había este respeto absoluto que es preciso prestar, no solo a la propiedad en sus formas actuales, sino a las determinaciones del propietario respecto de la misma (...) a imitación de la ley italiana, se introducía un derecho de exportación sobre los objetos mismos artísticos (...)*<sup>2658</sup>.

#### **4. Los límites de la potestad pública sobre los bienes religiosos de interés histórico y artístico.**

La tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico en los inicios del siglo XX van a estar marcado por la política de restablecimiento de relaciones entre el Estado y la Iglesia que iba a marcar el reinado de Alfonso XIII, por lo que en cierta manera probablemente no terminó de solventar los problemas que se habían producido en etapas anteriores a la hora de resolver el papel que le correspondía al Estado sobre aquellos bienes de interés histórico y artístico que pertenecían a la Iglesia, más aún cuando seguía confrontándose una doble identidad en el propio bien, con dos posturas que en muchos casos se harían irreconciliables, si eran bienes de interés público de valor monumental o si correspondían solamente un valor exclusivamente espiritual, que incluso seguiría siendo objeto de debate en el ámbito del Senado, como podemos comprobar en la interpelación del Ministro de Instrucción Pública en la sesión del 28 de mayo de 1914, por el defendía una propuesta de tutela que iría fraguándose posteriormente, como era la tutela compartida del Patrimonio Monumental Eclesiástico entre el Estado y la propia Iglesia, por el que se respetaba su derecho de la propiedad pero al mismo tiempo se intervendría en

---

<sup>2658</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Sesión de 25 de noviembre de 1910.

su conservación: *En cuanto a la riqueza que se conserva en nuestros templos y es propiedad de la Iglesia, considero que no puede ser objeto de disposición ministerial, sino de disposición concordada o de la Iglesia sola, porque como debemos suponer que tiene el mismo interés que nosotros en la conservación de esa riqueza artística nacional, ya lo demostrará, y me atrevería a decir que está ya muy adelantado el camino de que la propia autoridad eclesiástica dicte reglas para hacer su inventario artístico y prohibir su enajenación, permitiendo su exhibición mediante el establecimiento de los museos diocesanos. Eso lo hará la Iglesia y está en camino de hacerlo en estos mismos momentos*<sup>2659</sup>. Dos cuestiones van a centrar la política institucional sobre el Patrimonio Monumental Eclesiástico: la tutela de la exportación y de la restauración de los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico.

#### **4.1. Las carencias de la regulación de exportación de los bienes del Patrimonio Eclesiástico Monumental.**

Un gran número de bienes artísticos y arqueológicos que habían formado parte del Patrimonio Monumental eclesiástico fueron objetos de venta en mercados fraudulentos a lo largo de los primeros decenios del siglo, práctica que ya había sido habitual en las etapas anteriores, pero que sin duda alguna alcanza en estos años su punto más álgido. Los párrocos, las confesiones religiosas e incluso las instituciones eclesiásticas como los Cabildos Catedralicios, las Fundaciones Religiosas, las Cofradías se comportaban como verdaderos comerciantes, buscando el beneficio económico que le permitiera obtener una rápida ganancia. Ángel del Arco se lamentaba en 1902 en la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, la pérdida de los bienes eclesiásticos monumentales por la falta de una ley que limitara el pretendido tráfico ilegal que se estaba produciendo en muchas diócesis españolas: *Según me dicen, esta parroquia tenía antiguamente muchos objetos preciosos, y unos ricos tapices, que se enajenaron, conservando algunos la casa de Rostchildt. La eterna cuestión de todas las iglesias: la mayor parte de ellas han sido objetos de despojos o enagenaciones, debidas a la ignorancia ó á la imprevisión. ¡Cuántos tesoros se han perdido para la historia del Arte Religioso en España! No queda ya mucho; pero lo aún subsiste en las parroquias rurales debiera ser objeto de una fiscalización y legislación especialísimas por parte del Gobierno, ya que la gran mayoría de los prelados españoles no parecen preocuparse de estos tesoros del arte*<sup>2660</sup>.

Las disposiciones legislativas existentes no habían paliados las múltiples lagunas que se presentaban continuamente, a pesar de la vigencia de la Ley de 1866, que impedía la exportación de bienes eclesiásticos de interés artístico e históricos sin la autorización pública correspondiente, ya que en muchas ocasiones eran suplidas por la autorización de la autoridad eclesiástica

<sup>2659</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm. 39, Sesión del jueves 28 de mayo de 1914, p.492.

<sup>2660</sup> DEL ARCO, Ángel, "Notas arqueológicas de la diócesis de Tarragona", en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año VI, Noviembre de 1902, Núm. 11, p.370.

e incluso contaban con el permiso del propio Vaticano, por lo que se producía una confrontación de poderes de difícil solución. Un caso paradigmático que he escogido sobre la potestad que los Cabildos Catedralicios tuvieron a la hora de enajenar aquellos bienes que le interesaron puede ser la de las arquetas de la Catedral de Zamora, que provocó un amplio debate en la opinión pública e incluso en las propias Cortes, y pudo servir de precedente a disposiciones posteriores, resolviéndose por el Real decreto de 1911. La libre disposición de los bienes pertenecientes a las Fundaciones Religiosas volvería a quedar entredicha como lo demuestra la venta del cuadro de la Adoración de los Reyes Magos de Van der Goes, que también supuso un amplio debate en la opinión pública. Se reclamaba una nueva ley de tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico, apareciendo algunos proyectos en 1906 del Ministro Jimeno y del Conde de Romanones, que no llegarían a cuajar. Las propias autoridades eclesiásticas desplegaron una actividad eminente a fin de que se evitaran las continuas enajenaciones de bienes históricos y artísticos que se estaban produciendo en las parroquias, como lo demuestra el gran número de circulares de Obispos y Arzobispos a fin de que se limitaran las enajenaciones de los párrocos sin la autorización pertinente.

**4.1.1. Una nueva disposición legal sobre la venta de bienes eclesiásticos de interés histórico-artístico: El proyecto Jimeno de 13 de septiembre de 1906 y la pervivencia de la Real Orden de 10 de abril de 1866.**

El proyecto de 13 de septiembre de 1906 de Jimeno sobre la venta de los objetos religiosos de interés histórico y artístico dejaba en vigencia la real orden de 10 de abril de 1866. En su Exposición de Motivos dejaría constancia de la pérdida que se estaba produciendo del legado del Patrimonio Monumental Eclesiástico, aunque no culpando por ello a la actitud de los párrocos, ya que una gran parte de los mismos consideraba que no tenía la suficiente preparación cultural para cumplir el deber de conservación de los mismos: *En repetidas ocasiones ha llegado a este ministerio la noticia, siempre sensible, de ventas realizadas por el clero, movido por fines tal vez laudables como es el de recomponer los edificios eclesiásticos; pero padeciendo con ellas la integridad del tesoro artístico y arqueológico de la Nación, sobre el cual corresponde velar al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, si ha de justificar su nombre, auxiliado por la Academia de San Fernando y las Comisiones provinciales de Monumentos (...). Claro es que por regla general, no es posible exigir a los humildes párrocos de esos pueblos la necesaria preparación para comprender el mérito histórico, artístico y arqueológico que encierran los objetos que con sus iglesias se les confían; pero no es menos cierto que al recibir por ellos ofertas de importantes cantidades debían en todo caso consultar a sus superiores jerárquicos, y éstos a las Corporaciones que por los fines de sus institutos son competentes en la materia. De esta manera se dispondría que se cumpliera puntualmente lo mandado en la citada real orden de 10 de abril de 1866, según la cual, el clero no debe disponer de los referidos objetos artísticos y arqueológicos que se descubran en las iglesias y sus dependencias sin previo conocimiento de las Academias de la Bellas Artes o de las Comisiones provinciales de Monumentos.*

En la revista de Alhambra del 30 de septiembre de 1906, se precisaba que el Conde de Romanones preparaba una Real Orden estableciendo la intervención tutelar pública sobre los bienes eclesiásticos de interés artístico y arqueológico. Así siguiendo el texto publicado en la mencionada revista se dispusiera que en cada templo conserve sus riquezas artísticas, pero que no puede ser enajenados, y a este efecto proyecta hacer una revisión comprobatoria, partiendo de lo inventariado en cada templo después de la desamortización e investigar las causas originarias de las disminuciones. Para esta revisión se creará una Junta general y las parciales correspondientes en cada diócesis, formándose los inventarios por funcionarios especiales que anotarán las altas y las bajas, trasladando sus investigaciones al inventario general. Estos funcionarios serán nombrados por el Ministro de Gracia y Justicia a propuesta de los prelados, y será remunerado con cargo al capítulo de obligaciones eclesiásticas. Se dictarán las reglas oportunas para autorizar la enajenación de obras de arte cuando circunstancias especiales lo requieran; los objetos serían tasados y adquiridos por el Estado para los Museos en caso de que lo mereciere su valor artístico o arqueológico, pudiendo adquirir los particulares aquellos que no compraran la Nación, aunque con la condición de que no fueran exportados, por lo que tenían que declarar cual iban a ser el destino de los bienes adquiridos. Serían las Juntas diocesanas, con intervención del Estado, las que cuidarían de que se cumpliese los preceptos de la disposición legal. En cada diócesis se crearía un Museo en el que se depositaría todos los objetos pertenecientes al culto que se declarasen inservibles, haciéndose una requisa en aquellos monasterios que estuviesen cerrados al culto, pasándose a los Museos todos aquellos objetos que no formaran parte integrantes de los edificios. Al mismo tiempo se dispondría las medidas oportunas para que se custodiaran los objetos artísticos de las iglesias para evitar robos y profanaciones<sup>2661</sup>.

#### **4.1.2. Un caso de limitación de enajenación de obras religiosas de interés histórica y artística: la enajenación de la Arqueta de Zamora por el Cabildo Catedralicio.**

El Cabildo de la Catedral la daría a conocer en la exposición que se celebraría en Santiago de Compostela. En la reunión del Cabildo de 23 de febrero de 1910 informaba el deán que *por algunos anticuarios se le venían haciendo proposiciones para adquirir objetos de esta Santa Iglesia, unos deteriorados y sin uso, y otros fácilmente sustituibles por nuevos y menos valiosos (...)*. En marzo de 1910 se solicitaba y había obtenido el permiso del Nuncio Apostólico la autorización para las ventas de estos objetos. En los últimos días de febrero de 1911, el obispo de Zamora, Luis Felipe Ortíz y Gutiérrez, recomendaría la autorización del Papa. En la reunión del 16 de febrero de 1911, el deán dio cuenta al cabildo de que el Papa había otorgado su

<sup>2661</sup> “Las riquezas artísticas de los templos”, en *La Alhambra Revista quincenal de Artes y Letras*, Año IX, 30 de septiembre de 1906, Núm.205, pp.411-412.



venta, con la condición de que la mitad del valor se aplicara a la fábrica de la Catedral, y la otra mitad a la mesa capitular. Paradójicamente, el deán, Estanislao de Cuadra se refería a las mismas como piezas de escasísimo valor intrínseco y de ninguna utilidad para su uso, pero de mucha estimación en el mercado de antigüedades. En los días siguientes, el deán efectuaría la venta, notificándole al anticuario madrileño Juan Lafora la aceptación por parte del Cabildo de la oferta que se le había hecho. El 23 de febrero de 1911 las arquetas serían vendidas por 52.500 pesetas, adquiriendo a su vez el Cabildo a raíz de la venta, varios títulos de la deuda pública. Gómez Moreno que había conseguido el permiso reglamentario de Roma, comunicándose el asunto al Ministro de Gracia y Justicia, del que dependía todo lo relacionado con los asuntos de la Iglesia, y se ofreció la pieza al Estado, no obteniendo respuesta<sup>2662</sup>. Pasó el tiempo y al no tener noticias del Estado, se negociaría la operación con Lafora en secreto, sin comunicación con el Ministerio. El anticuario facilitó el bote a dos personas<sup>2663</sup>,

La venta de estos objetos artísticos se convertiría en objeto de debate parlamentario en ambas cámaras, en la que nuevamente se estaba contrastando la capacidad del Estado en intervenir en los asuntos eclesiásticos, en este caso en la libre disposición de los bienes por parte de la Iglesia. El día 5 de marzo de 1911 el diputado conservador Osma denunciaba los hechos ante el Congreso, poniendo en entredicho la capacidad jurídica del propio Cabildo Zamorano en la venta de los botes: *Los señores canónigos de Zamora hubieran podido tomar fácilmente buenos ejemplos (...) Pudieron fácilmente haber conocido el ejemplo nobilísimo, dado por el venerable Cardenal Primado de España, que ha solido, cuando se solicitaba su autorización para enajenaciones análogas, que ha solido espontáneamente, patrióticamente, naturalmente, poner por condición efectiva la de que fuera ofrecido al Gobierno de la Nación la opción y el derecho de tanteo sobre el objeto. Pudieron muy bien aquellos señores conocer el ejemplo que se les daba por otro Cabildo y conocerlo por el elogio al patriótico desprendimiento de ese Cabildo. Solicitaría por consiguiente la correspondiente investigación del Presidente del Consejo de Ministros donde se extravió aquel ofrecimiento preferente que no llegó hasta el Gobierno. De la misma manera, solicitaría que por vía diplomática se confirmara si la Santa Sede había autorizado dicha venta: yo suplico al Gobierno que, si en ello no ve inconveniente, por la vía diplomática, por el conducto natural de nuestra Embajada cerca de la Santa Sede, confirme el hecho de haberse conseguido esa autorización<sup>2664</sup>*. La posterior intervención del Presidente del Consejo Ministros, José Canalejas, despejaría algunas dudas sobre la posición gubernamental que se defendía en torno a la tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico. Después de reconocer que no conocía los detalles

---

<sup>2662</sup> GÓMEZ MORENO, Manuel, Arquetas hispano-árabes, Madrid, 1912, pp.53-65.

<sup>2663</sup> MARTÍN MORENO, J.I; REGUERAS GRANDE, F. “El bote de Zamora: historia y patrimonio” *De Arte* 2, 2003, pp.203-223. La venta aparece relatada en La ilustración española y americana, 22 de marzo de 1911.

<sup>2664</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso, Núm.5, Sesión de 5 de marzo de 1911, p.58.

que se había realizado el procedimiento seguido por el Cabildo de Zamora, que haría la pregunta por vía diplomática a la Santa Sede: *No conozco todos los detalles del procedimiento seguido por el Cabildo de Zamora en el presente caso; como el Sr. Osma me inclino a creer que cuando persona de respeto asegura que se puso en noticia del Gobierno el propósito de vender esta joya artístico-religiosa, algún hecho justificará semejante alegato (...) No quiero desaprovechar la ocasión para decir al Sr. Osma y a la Cámara que, sin perjuicio de esta pregunta que por vía diplomática haremos, y de adoptar en el caso actual las resoluciones que procedan, hay que pensar en evitar la repetición de hechos semejantes.* A lo largo de su discurso, Canalejas pondría en entredicho el derecho de tanteo en los casos de la adquisición de obras de arte, debido especialmente a la falta de recursos económicos que el Gobierno en estos momentos para poder pujar en el mercado, lo que llevaría a una verdadera especulación mercantilista de los bienes artísticos, cuyo resultado sería la pérdida de un gran número de piezas: *¿Puedo yo reconocer ni admitir provisionalmente aquella doctrina que me parece acogía con reserva el Sr. Osma, de que ofrecido el ejercicio de derecho de tanteo al Estado pudiera consumarse la venta? No; y puedo admitirla menos en la práctica que en el concepto jurídico, porque si mañana, sin medios de presupuestos para realizarlo, se sometieran al Gobierno español propuestas de ventas de joyas artísticas y religiosas como esa por cantidades enormes, la imposibilidad de atender en el acto al ejercicio de tanteo, libertaría a los Cabildos o a los poseedores de esa reliquia de acudir a especulaciones, cuyo concepto tiene que estar modificado por el de la afección a que respondieron o a las donaciones o a las adquisiciones de esos bienes*<sup>2665</sup>. Incluso pondría en duda el concepto de dominio de los bienes eclesiásticos, especialmente en aquellos que tuvieran un interés histórico o artístico: *No puedo admitir que la mera tenencia, la mera posesión por parte del Cabildo, por parte de cualquier institución religiosa, de una joya semejante, le autorice a venderla libremente si la cosa es sagrada, está fuera del comercio de los hombres; si es patrimonio nacional, debe ser garantizado por la eficacia del ejercicio de la intervención del Poder Público. Y si en penumbras encontramos el concepto de que pueda ser cosa sagrada o propiedad nacional, a esas penumbras hay que atender para esclarecerlas. ¿Es que la joya, es que el monumento artístico puede ser materia de comercio, desligándose de todo carácter nacional, y de toda disciplina religiosa, sin determinar los fines a que afecta la venta, aún prescindiendo de la profanación que puede implicar en algún caso –yo no digo que éste– el haber el objeto contenido reliquias sagradas, que, naturalmente, han determinado una cierta accesión de cosas sagradas y religiosas?. De ahí que pusiera en entredicho la libre disposición por parte de las instituciones eclesiásticas de las obras religiosas de interés histórico y artístico: *Por eso he querido que, sin perjuicio de examinar el caso concreto, quede establecido muy claro que no puede ejercitarse ni por los Cabildos ni por nadie ese Jus Abutendi a que con tanta discreción y tan suprema habilidad parlamentaria apelaba mi amigo el Sr. Osma (...) Y como ese Jus Abutendi, ejercido con repetición que ya va siendo peligrosa y molesta, contrasta con el ejercicio normal**

<sup>2665</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.5, Sesión de 10 de marzo de 1911, p.59.

*de su derecho, adoptando garantías y métodos de publicidad empleados por otros Cabildos y otros Prelados (...)*<sup>2666</sup>.

Su intervención acabaría con un alegato a la intervención del Estado en la tutela del Patrimonio Eclesiástico Monumental: *Así, tengo que afirmar que la solución de derecho de tanteo no me satisface, que es incompatible con los medios económicos de la Nación, que es incompatible con el concepto jurídico de la propiedad de esos bienes, y que solo por una relajación de la disciplina del Estado, sólo por una timidez de la intervención del Estado, sólo por una injerencia en lo que no es materia propia de la administración y de la capacidad de la Iglesia, se ha consentido en casos singulares y no se puede seguir consintiendo. (...) Cuando se trató, en una ley malograda, de defender las riquezas artísticas de España y se habló del ejercicio del derecho de tanteo y de todas las precauciones necesarias para asegurar la permanencia en nuestra patria de lo que será deshonor que vaya emigrando dije que era preciso estudiar bien un concepto jurídico compatibles con los medios económicos de la Nación (...) hay que alterar muchas veces la norma del derecho, como se ha alterado en todas las circunstancias, y España tiene que preocuparse de que no se despoje de todas sus riquezas artísticas, dentro de los términos compatibles con sus recursos económicos. Con un gran Tesoro, con gran espléndida dotación de recursos para adquirir el ejercicio del derecho de tanteo, se puede adoptar temperamentos muy distintos de lo que permiten las condiciones singulares y concretas en que tenemos que desenvolvernos dadas las cifras de nuestro presupuesto, sin que esto quiera decir que no sea preciso hacer más enérgico y activo el imperio del Estado y tener de la propiedad aquel concepto que va templando el rigorismo del antiguo derecho quirritario y del jus abutendi, el que yo tengo, es a saber, que una Nación tiene que defender sus riquezas artísticas, que son legados de la historia, tejidas en muy complejas relaciones, y que eso hay que resolverlo con imperio del Poder Público*<sup>2667</sup>.

Como réplica a las posiciones defendida por Canalejas y Osma, el diputado Senante intervendría en defensa de la libre disposición de los bienes por parte de la Iglesia, defendiendo la actitud que había adoptado el Cabildo Catedralicio zamorano: *estimo que la cuestión tiene dos aspectos: uno concreto, especial, el hecho de la venta de esa joya artística; otro general, que es el que atañe el derecho de la Iglesia para disponer como bien le parezca de todo aquello que constituye su legítimo patrimonio. Tan suyo como lo son de un particular los tesoros artísticos que tenga en su casa. Para afirmar lo contrario, tendrías que comenzar probando que había restricciones en esa propiedad. Si esas restricciones existiesen, tendrías razón; pero mientras no la probéis, la Iglesia es dueña absoluta de todo lo que le pertenece, y puede disponer de ella sin tener que ajustarse más que a las prescripciones del derecho canónico. Sujetándose a ellas, es libérrima para proceder como le parezca, y el juicio de si se ha ajustado o no a esas prescripciones, y la determinación de las sanciones que procedan por haber faltado a ellas, no es al Estado ni a los Ministros del Gobierno de España a quienes compete, sino a la misma Iglesia, única autoridad con jurisdicción en esta materia. Con relación al hecho*

---

<sup>2666</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.5, Sesión de 10 de marzo de 1911, p.59.

<sup>2667</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Núm.5. 10 de marzo de 1911, p.60.

*concreto, el Cabildo de Zamora, teniendo graves necesidades económicas, y sin medios para atender a ellas, porque ya cuidó el Estado de empobrecer a las iglesias privándolas de sus bienes, se ha visto en el caso de tener que proceder a la enajenación de las joyas (...) Como veis respecto al hecho concreto, el Cabildo de Zamora ha procedido dentro de su derecho y amparándose en las disposiciones canónicas sobre el particular; pero si de éstas hubiera habido alguna infracción, no es el Gobierno español quien ha de depurarla, sino las autoridades eclesiásticas, que son las únicas llamadas a intervenir, porque se trata de una joya propiedad de un Cabildo eclesiástico*<sup>2668</sup>.

El debate prosiguió en el Senado, destacando las tesis defendidas por Tormo, quien nuevamente, en clara línea a la defendida por Canalejas, deja en entredicho el carácter absoluto del derecho de disposición de los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico: *al último de los escándalos patriótico de enajenación de obras de arte, insignes muestras de nuestro pasado (...) Creo necesario, hace constar, al menos mi humilde protesta ante el acto incalificable del Cabildo de la Catedral de Zamora, enajenando una de las preciosidades históricas y artísticas del pasado de la Nación española. Creyéndose en uso de un pleno derecho de propiedad, que desde luego reconozco a la propiedad particular, pero siempre en el Derecho Canónico y Civil tiene modalidades distintas, cuando se trata de la propiedad corporativa, el Cabildo de Zamora, al parecer sin noticia de nadie, quizás con autorización que se ha tramitado también en secreto, ha puesto fuera de España una de las siete arquetas, maravillosa obra de arte de los siglos X y XI, habiendo tomado el camino que tantas obras que podemos gozar visitando el Museo de Londres o del Louvre, de París. Hay en este momento negociaciones, felizmente terminadas, que sería preciso alabar, porque se contrapondrían a la conducta del Cabildo de Zamora, la de otro digno Cabildo, que ha ofrecido al Gobierno español otra de estas preciosidades, y yo desde aquí, conociendo la historia particular de esta oferta a que secundariamente me refiero, dedico un aplauso al Cabildo de Palencia, al mismo tiempo que vengo a preguntar al Gobierno de S.M. si respecto al Cabildo de Zamora está dispuesto a sentar los derechos altísimos que por concesiones de carácter canónico tiene S.M. como Real Patrono de aquel Patronato, para que no pueda ocurrir, sin su noticia, al menos sin su consentimiento, enajenaciones de obras de arte; que cuando se trata de Patronatos de sangre, de Patronatos de la nobleza particular, se consideren los patronos con tantos derecho casi como de propiedad privada, y en cambio, cuando se trata del Patronato Real, se pueden hacer las cosas con la suprema desconsideración que supone el no darle noticia siquiera del caso. (...) Mi punto de vista es que se hace necesario que se entienda que el Gobierno defiende el Real Patronato de S.M., sobre todo cuando se trata de casos de absoluta desconsideración (...) y que no pueden tramitarse estas autorizaciones cuando en sí misma contienen cláusulas de respeto a las leyes del país y aún de respeto a la opinión pública (...)*<sup>2669</sup>.

El 13 de marzo de 1911, el propio Presidente del Consejo de Ministros, Canalejas anunciaba *quela caja en cuestión y otras de menor importancia que*

<sup>2668</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Núm.5. 10 de marzo de 1911, pp.60-61.

<sup>2669</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.6, Viernes 10 de marzo de 1911, pp.48-49.

*pertenecían también al tesoro artístico de la misma catedral se encuentran en Madrid, y tengo la satisfacción de anunciar a la Cámara que mañana quedarán depositadas ambas cajas en poder del Estado, sin prejuzgar de parte del Estado ninguna cuestión de derecho y sin que en ningún caso, si la solución jurídica de este problema un tanto oscuro fuese tal que no implicara compromiso efectivo para el Estado, el adquirente de la caja dejará de recibir de quien fuere, no del Estado español, aquella indemnización que yo he estimado deber personalmente garantizar para tal eventualidad*<sup>2670</sup>. Dos días antes, el diputado Burell intervendría en el Congreso para estimular al Gobierno el paradero de las cajas de Zamora, ya que en su opinión podía ocurrir lo mismo que en el caso de los cuadros de El Greco de Monforte: La cuestión primera es saber si la caja de marfil está en España, porque si no está en España, ocurrirá en este caso exactamente lo mismo que con los cuadros de El Greco de Toledo, que después de una gran discusión en el Parlamento, los Grecos están en París, Alemania, o no sé donde (...), y la caja de marfil desaparecerá si el Gobierno no se apresura a dar órdenes terminantes al Cabildo de Zamora, por conducto del gobernador de dicha capital, para que esta caja, de momento, permanezca en España<sup>2671</sup>. El ministro Castrillo puntualiza que ha comenzado la investigación policial, y confirma que la venta se había ya producido meses antes.

Unos días después, en la sesión del Senado celebrada el día 14 de marzo de 1911, nuevamente el insigne historiador del arte Elías Tormo defendería la intervención del Estado en la enajenación de las obras de arte sin autorización pública, especialmente en aquellas instituciones que legítimamente pudiera hacerlo: *Claro es que el Gobierno ha procedido así, sin prejuzgar la cuestión de la propiedad, la legitimidad de la venta, la nulidad de ella, las responsabilidades, todas las consecuencias del acto jurídico que sigue en tela de juicio; pero provisionalmente, con energía, con prontitud (...) que debemos tributar al Gobierno, esos objetos están ya en el Museo Arqueológico Nacional depositados, para adquirirlos en la forma que parezca más conveniente, cuando se resuelva toda esa serie de problemas. (...) Mi pregunta dirigida en general al Gobierno, sobre un asunto que moralmente es competencia del Ministro de Instrucción Pública, pero que quizás jurisdiccionalmente es de todo el Gobierno (...) mientras la ley no se haga, puede enajenarse libremente la obra de arte de propiedad estrictamente particular, aquella que está en relación con una persona individual; cuando se trate de una persona jurídica, ya hay necesidad de otros problemas, porque la representación de una persona jurídica no es la misma persona jurídica que representa, porque muchas veces las personas jurídicas tienen algo como la eternidad, la perpetuidad; reciben las cosas con encargos, y aquellos que fueron donadores incorporan a la donación algo de su voluntad testamentaria. Por eso cuando se trata de Ayuntamientos, de Diputaciones o Universidades que no tuvieran autonomía, de instituciones de Beneficencia, aún los de carácter particular, hay por parte del Estado algo como una intervención superior, eso que la acción de beneficencia llama protectorado fiscalizador y examinador, y por esta alta inspección del Estado es necesario que cuando se enajenen obras de arte que*

---

<sup>2670</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.7, 13 de marzo de 1911, p.105.

<sup>2671</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm. 6, 11 de marzo de 1911, pp.88-89.



*en cierto modo no son de la individualidad, sino legados de una o varias personas de generaciones pasadas que las dieron con destino determinado que no fuera para lucrarse, y el Estado, que se supone que ha de cuidar de los intereses de los que pasaron, por este principio que exige que el tutelar, el albacea o cualquiera que enajene bienes ajenos no tengan la libertad que se concede a quienes dispone de intereses propios, dentro de esta doctrina especial, el Estado tiene la misión de ejercer una especie de protectorado para el examen de cada uno de los problemas de enajenación en los casos de personalidades jurídicas que no son la personalidad individual; y en este caso, pido el examen del Gobierno, con atención, con tanta más razón cuanto que el problema de las arquetas que se han llevado al Museo Arqueológico Nacional está vivo, supuesto que todavía no se ha prejuzgado la cuestión de la legitimidad de la venta (...).*

El final de su intervención encerraba la línea doctrinal más abierta a la defensa de la intervención general del Estado sobre los particulares, en este caso concreto a la exportación de obras de arte de interés religioso, los bienes preciosos del código canónico: *Yo he dicho aquí otras veces (...) que me sorprendía extraordinariamente esta contradicción; que cuando se ha tratado aquí por mí de enajenaciones hechas por un patronato particular o de sangre, al patrono le hemos concedido derechos casi tan grandes como el de propiedad, y cuando se trata de iglesias, de las cuales el Rey, canónicamente, no por soberanía civil, sino por virtud del derecho canónico es patrono, no solamente no se le concede la responsabilidad, que en mi concepto no tiene, pero ni siquiera el aviso, no el consentimiento; y cuando el derecho canónico dice que para la enajenación de obras preciosas (que este es el término canónico, objetos muebles preciosos, y se entienden preciosos en el estado actual del valor de la moneda los superiores a las 500 pesetas), que en la enajenación de objetos preciosos tenga intervención el patrono (...). Yo pido que el Gobierno recabe este principio de la intervención, y repito que, en mi concepto, no es consecuencia de la soberanía civil tanto como consecuencia de la institución canónica, que recibió por méritos de guerra, de conquista o de dotación o de fundación de iglesias, el Monarca español como patrono de muchas de ellas; y si en las otras puede haber el problema que antes me refería, en éstas, con arreglo al derecho canónico, es necesario el consentimiento de S.M. como Real patrono, para que puedan ser válidamente hechas estas enajenaciones, contra las cuales, en casos como el presente, podríamos invocar el principio de nulidad, que espero que el Gobierno invoque (...). Es preciso que se recaben estas facultades, que se examinen cada vez más estas cuestiones, y que, en su caso, cuando la legitimidad del derecho de enajenación sea evidente, cuando pueda equipararse por completo al derecho de propiedad privada, entonces podremos recurrir a la ley, y mientras no recurramos a ella, estará sujeto al principio de la omnímoda libertad de que hoy se goza para la enajenación de obras de arte<sup>2672</sup>. Cabe mencionar la actitud del Obispo de Jaca, senador, que se opondría a las tesis defendidas por Elías Tormo, que resumía el parecer de los sectores intelectuales más progresistas del país.*

<sup>2672</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.9, Sesión de 14 de marzo de 1911, pp.77-78.

La opinión pública no quedó ajena a la polémica sobre la disposición de los bienes eclesiásticos de interés histórico-artístico, reflejándose las distintas posturas ideológicas del momento. De esta manera el periódico tradicionalista-católico El Correo de Zamora defendería sin tapujos la actitud del Cabildo de Zamora, concretamente en el artículo del 11 de marzo de 1911 bajo el título “Sobre una venta de objetos de arte”, reiterando *que dicha venta está perfectamente justificada no sólo por el indisputable derecho de todo propietario a enajenar sus bienes para atender a sus necesidades, sino además porque no hay disposición alguna que lo prohíba, aunque si existiera sería abusiva por constituir un ataque intolerable al derecho de propiedad*. En una línea contraria, se encontraría el periódico El Herald, de ideología liberal, que se unía a las tesis defendidas por Canalejas, en el artículo publicado el día 13 de marzo de 1911, con el título Sobre el relicario vendido, por lo que el Estado tendría un derecho preferente sobre aquellas obras en que los cabildos son meros depositarios de la voluntad de personas cuyos legados fueron hechos por fieles. Cabe mencionar el artículo de Mariano de Cavia aparecido en El Imparcial,

Lo cierto es que el día 14 de marzo las cajas habían quedado depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, comprándose al anticuario Lafora por la misma cantidad en que éste las había adquirido. El día 8 de mayo se presentaría el expediente de adquisición en el Congreso: quedaron sobre la mesa, a disposición de los Señores Diputados el expediente sobre adquisición propuesta al Estado por el Cabildo-Catedral de Zamora, de dos cajitas antiguas de carácter mudéjar, enviado por el Sr. Ministro de Instrucción Pública, a petición de los Sres. Burell y Osma. Sería por Real Decreto de 20 de junio de 1911 cuando se dispuso oficialmente la adquisición de las dos arquetas por el precio de 52.500 pesetas, una por 25.000 y otra por 27.500, efectuándose el primer pago de 25.000 ptas el 29 de octubre de 1912.

#### 4.1.3. Los límites del derecho de disposición de los bienes de interés histórico y artístico de los Patronatos Eclesiásticos.

##### **- La interpelación de Elías Tormo sobre la enajenación de bienes religiosos de interés histórico y artístico bajo la jurisdicción del Patronato Real.**

Elías Tormo comenzaría su interpelación centrándose en los derechos de los Patronatos sobre sus bienes artísticos: *De la más o menos inminentes y temibles enajenación de obras de arte de mérito insigne, por Cabildos o entidades que, en mi concepto, tienen deberes de atención con el Real Patronato. Los amantes del arte sabemos bien hasta que punto desde el extranjero se están proyectando en estos momentos y se hallan en vía de ejecución, planes por los cuales se perderían algunos de estos objetos. Uno de ellos (...) unos maravillosos tapices que están en las catedrales de la insigne catedral de Zaragoza. Estos tapices, que mal vendido significaban una cantidad que se aproximaba a 400.000 pesetas (...) no está claro si fueron depósitos de los Reyes Católicos o llegaron a la Catedral por la testamentaria de uno de los Arzobispos de la ciudad, emparentado, por línea bastarda, con el Rey Católico (...) Mi ruego consiste en que el Sr. Ministro de Gracia y Justicia tenga la*

*bondad de remitir a la Cámara cuantos antecedentes existan (...) para que podamos darnos cuentas de las autorizaciones que han podido exigirse, de las que se han dado por una y por otra potestad y para que podamos saber si en la misma autorización pontificia, si la hay, se usan aquellos términos sapientísimos que es de costumbre y por los cuales no pueden hacerse la enajenación cuando exista extrañeza o protesta del pueblo fiel, o cuando no se someta por completo a las autoridades civiles del país (...) Y puesto ya a hablar de este asunto, creyendo que siempre los deberes y derechos del patronato, aunque sea Real, son por los menos iguales que los derechos que siempre se reconocen al patronato laical de las casas nobles, no he de hacer notar sino que entiendo que, sin faltar a los principios del derecho Canónico, en las relaciones entre el patronato y la iglesia, no es posible que desconozca S.M. el Rey y su Gobierno esta clase de enajenaciones (...) si S.M. el Rey es patronato de la mayor parte de las iglesias españolas, y el derecho Civil y el Derecho canónico le reconocen intervención en cuantas enajenaciones o pérdidas de bienes puedan sufrir las iglesias de su patronato, S.M. el Rey es maestro de la Orden, propiedad de la cual es este soberbio objeto de arte cuya venta está en estudio<sup>2673</sup>. El Obispo de Jaca remetería contra Elías Tormo defendiendo el carácter absoluto de la propiedad eclesiástica: Si tiene derecho de propiedad la iglesia ¿Con qué derecho el Estado, adelantándose al socialismo, puede disponer de esa propiedad particular de la Iglesia, prohibiendo que, sin compensación alguna, se haga la enajenación? Si el Estado español cumpliera sus deberes, consignados en solemnes pactos, de atender a la reparación de los templos, no se venderían los objetos de arte, y no se venderían a extranjeros, previas las formalidades de las leyes civiles y canónicas, si el Estado quisiera comprarlos. Elías Tormo nuevamente defendería los derechos del Real Patronato sobre el Patrimonio de la Iglesia: Ha sido recabar para el Real patronato de las iglesias de España derechos oficiales que en los patronatos particulares de tal modo se reconocen (...) donde el derecho canónico ha establecido principios fundamentales, han sido en problemas de adquisición (...) Pero, lo que es para enajenar los derechos de la intervención del patronato son indiscutibles (...) ¿Cree el Senado que han de aminorarse o acrecentarse los derechos y consideraciones debidas al Real Patronato? (...) El Sr. Obispo de Jaca ha discutido las atribuciones del Poder Civil (...) el derecho canónico de Real Patronato. Por su parte el senador Cabelton preguntaba a la Cámara cual era las disposiciones vigentes de los Reales Patronatos sobre los bienes eclesiásticos: En los actuales momentos, dentro de la legislación vigente, ¿cree S.S. que un Arzobispo o un Obispo o cualquiera dignidad eclesiástica, puede vender los objetos de arte depositados en las catedrales, sin previo expediente y sin permiso del Patronato? A eso quiero que conteste S.S. para que sepamos de un modo terminante cuál es la doctrina jurídica que tiene el Gobierno respecto de este asunto<sup>2674</sup>.*

***- La prohibición de exportación de los bienes artísticos de las Fundaciones de Beneficencia: El Real decreto de 16 de julio de 1910.***

La libre enajenación de los bienes artísticos pertenecientes a las Fundaciones de Beneficencia se insertaba en torno a la capacidad jurídica de

<sup>2673</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.9. Sesión del 20 de octubre de 1908, p.105.

<sup>2674</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.9. Sesión de 20 de octubre de 1908, p.109.

libre disposición que como propietario, gozaba de sus bienes. Sin embargo, se había cuestionado dicha capacidad jurídica en el momento en que empezaba a prevalecer un interés general en torno a estos bienes fundamentando en el valor monumental de los mismos. Las controversias que habían surgido en torno a las enajenaciones de cuadros pertenecientes a las capillas cuya propiedad estaba insertada en una Fundación Religiosa llevarían a promulgarse el **Real decreto de 16 de julio de 1910** por el que se disponía que en lo sucesivo se necesitará autorización de este Ministerio para enajenar bienes pertenecientes a instituciones de beneficencia que tengan valor artístico o significación histórica. En la Exposición de Motivos ya aparecía la necesidad que existía en el ámbito de la legislación española la regulación de exportación de las obras de arte pertenecientes a las Fundaciones de Beneficencia: *Notoria y antigua es la necesidad de medidas que, adoptadas dentro de las atribuciones inherentes al protectorado sobre las instituciones benéficas, vengán a coadyuvar en el propósito de impedir la salida del territorio nacional de aquellos objetos que tienen gran valor artístico o especial significación histórica. Su peculiar régimen patrimonial quedaba patente al señalar que la resolución adecuada y completa de todos los problemas que con tal materia se relacionan, exigirá seguramente medidas legislativas, por ser éstas las únicas que con legitimidad y eficacia podrán oponer limitaciones a la plenitud del dominio privado, pero en cuanto se refiera a las instituciones de beneficencia, las condiciones especiales de su representación y de su propiedad permiten a este Ministerio adoptar por el momento las justificadas determinaciones que del mismo se requieren, al igual que la fragmentación de las disposiciones legales que se iban a promulgar sobre las mismas: Sin necesidad de acudir a la Real cédula de 28 de abril de 1837, que inicia las prohibiciones en este punto con carácter general, ha habido y hay en la legislación especial sobre beneficencia, concordada con el Código Civil, disposiciones que, rectamente interpretadas, serán remedio en muchos casos para el mal y el peligro que se observan. En efecto, el art.67 de la Instrucción vigente de 14 de marzo de 1899, requiere la especial autorización de este Ministerio para que se vendan los bienes inmuebles correspondientes a una fundación, y es notorio que, dada la amplitud de ese concepto jurídico tal como lo desenvuelve el art.334 del Código Civil, a tenor especialmente de su núm.4º, vendrán a tener la consideración de inmuebles, ya que no por su naturaleza, al menos por su incorporación o destino, la mayor parte de los objetos artísticos, desde luego los correspondientes a la Arquitectura, y casi siempre o en muchos de los casos las esculturas y los cuadros. Aunque como queda expuesto resulta protegida indirecta pero eficazmente en muchos casos, la conservación de las obras de arte pertenecientes a las fundaciones, es, sin embargo, conveniente y legítimo dictar un nuevo precepto que de modo especial y expreso abarque todos los objetos de valor artístico, sea cual fuere el lugar que les corresponda en la clasificación jurídica de los bienes.*

Se dispondría que se necesitaría la autorización del Ministerio de la Gobernación para enajenar los bienes pertenecientes a instituciones de Beneficencia que consistan en pinturas, esculturas, bronce, porcelanas, esmaltes, tapices, joyas, ornamentos, códices, manuscritos, y, en general, los de

valor artístico o significación histórica, aun cuando no tuvieran por su incorporación o destino la consideración jurídica de inmuebles (art.1). En el expediente administrativo para la transmisión de dominio se seguirían los trámites que para autorizaciones análogas había establecido la Instrucción de 14 de marzo de 1899, al mismo tiempo que se pediría informe al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, ofreciéndole la adquisición, con destino a los Museos del Estado. En base al Informe presentado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, resolvería el de la Gobernación denegando la autorización solicitada o concediéndola con la condición, en este caso, de que no pondrán ser vendidos los objetos a particulares o Corporaciones por precio igual o inferior al ofrecido por el Estado si éste hubiera estimado conveniente hacer la adquisición (art.1.1). El importe de las ventas se depositará, a nombre de la fundación, en la Caja de Depósitos o en las del Banco de España, convirtiéndose en inscripción intransferible de la Deuda perpetua interior (art.1.2). De igual manera se necesitaba también autorización del Ministerio de la Gobernación, fijando las garantías que estimase oportunas, siempre que se intentase enviar al extranjero, aun cuando solo se tratase de exhibirlos en exposiciones o de someterlos a trabajos de restauración. Igual autorización se necesitará para trasladar dichos objetos de un punto a otro del territorio nacional siempre que hubieren de atravesar territorio extranjero o ser embarcados (art.2.1). Se necesitaba asimismo permiso de la Dirección general de Administración para exhibir lo objetos en exposiciones que se celebrasen dentro de España, y en general, para sacarlos de los lugares en que la fundación respectiva tuviere su domicilio o cumpla sus fines (art.2.2). Con el objeto de suplir cualquier duda se dispondría que los deberes establecido en el Real decreto serían extensivos a todas las fundaciones, aunque estuvieren sin clasificar (art.3), aunque en la práctica siguió no quedó completamente resuelto. Serían declarados nulos aquellos contratos que hubiesen infraccionados lo dispuesto en el Real Decreto, no pudiendo convalidarse por autorización posterior del Ministerio que en tales casos y sin ningún trámite sería necesariamente denegada (art.4.1). Incluso el proceso sancionador afectaría a los propios representantes legítimos de las fundaciones que podían ser suspendidos y destituidos en caso de infracción (art.4.2). Los representantes de las Fundaciones, así como las Juntas de Beneficencia, darían las necesarias facultades a los funcionarios debidamente autorizados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para formar el inventario de los objetos de valor artístico o interés histórico, pertenecientes a las instituciones de Beneficencia (art.5).

*- La venta del cuadro de la Adoración de los Reyes de Van der Goes, propiedad del la Fundación Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, Monforte (León), como objeto de polémica en los debates parlamentarios sobre exportación de bienes de interés histórico y artístico.*



Probablemente en la venta del cuadro de Van der Goes, la Adoración de los Reyes vamos a encontrar uno de los casos más significativos sobre la potestad del Estado sobre la Iglesia en el ámbito de la tutela del Patrimonio Cultural a principios del siglo XX. Siendo rector el P. Santoja, en 1909 decidió vender el cuadro con la excusa de resolver los problemas financieros por lo que estaba pasando el colegio. Así, de acuerdo con el Patrono, el Duque de Alba, Don Jacobo Fitz James Stuart Falcó, se decidiría vender el cuadro para adecentar el colegio. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1909, el Ministro de Instrucción Pública, Rodríguez Sampedro, enviaría un telegrama al Gobernador de Lugo prohibiéndole que dejara salir el cuadro. En los términos del mismo ya se estaba aludiendo al régimen jurídico en que se encontraba dicha obra: *Como quiera que fundador al donar cuadro citado prohibió su venta, sírvase Ud. decirme qué hay de este asunto y adopte disposiciones precisas para evitar sea burlada la voluntad del fundador, impidiendo que el cuadro salga del Colegio interim la Superioridad resuelva lo procedente.* Ante la prohibición de venta por el Gobierno, el rector del Colegio el 15 de abril de 1909 se dirigió al Duque de Alba, solicitando nuevamente la venta para que así pudiera ser atendida los gastos del colegio. Accedió el duque a la petición del rector publicándose inmediatamente el proceso que se debía seguir en la venta del cuadro. Pronto los Escolapios tendrían la oferta de compra de Walter Gretor, agente oficial del gobierno de Prusia. Al mismo tiempo, el Duque de Alba escribió al Ministro de Instrucción Pública, Romanones, ofreciéndole el cuadro a un precio más bajo del que se ofreciese a un extranjero, sin obtener una clara respuesta del Ministerio. Este hecho dio lugar a que el rector de Monforte formalizara la venta de la tabla en un millón doscientos sesenta y dos mil ochocientas pesetas en documento privado, mediante la entrega de cincuenta mil y las restantes le serían entregadas cuando el cuadro estuviese en poder del Embajador de Alemania<sup>2675</sup>.

El cuadro de Van der Goes como anteriormente había ocurrido con los cuadros del Greco se convirtió en objeto primordial de amplios debates parlamentarios que en el fondo se estaba juzgando nuevamente el derecho de la propiedad privada y de las instituciones como los Patronatos sobre los bienes de interés histórico y artístico. En los distintos periódicos tanto locales como nacionales se debatiría la propiedad del cuadro que iba a ser vendido. Así en mayo de 1909 el Regional publicaba un artículo con el título “Un despojo artístico” en la que defendía como el Estado español tenía prioridad en adquirir el cuadro, dudando que fuese un bien del Patronato. Desde las páginas de El Liberal se pediría al Ministerio que se dictaran normas para los monumentos del Estado no fueran vendidos sin el permiso de la autoridad pública. En la sesión del Congreso del 13 de junio de 1912 el diputado Burell ponía en

---

<sup>2675</sup> DIAZ FERREIROS, Juan “La Adoración de los Reyes de Hugo Van der Goes. De Monforte a Berlín”. *Boletín del Museo Provincial de Lugo*, N.6, 1993-1994, pp.87-89.

cuestión la naturaleza jurídica del Patronato de Monfortes: *Esta fundación no está clasificada, no tiene patrono, al menos no se reconoce como patrono al Sr. Duque de Alba, siendo de notar que quien autoriza a los escolapios para la negociación es precisamente el ilustre jefe de la gran Casa española. de suerte que yendo al fondo, dirigiéndose a la entraña de la cuestión, al Ministerio de la Gobernación, que clasifica y ordena y vigila las fundaciones todas, allí no aparece esta fundación clasificada, allí no aparece como patrono el Duque de Alba (...). Pues bien; esta fundación se remonta al año 1593; fue entregada a los jesuitas en 1600, y en 1769 el Estado procedió a la incautación del convento y de todo cuanto encerraba(...) ¿Ha habido alguna disposición que restablezca las cosas al estado anterior a la Pragmática de Carlos III y a la incautación ordenada por el Conde de Aranda? (...) Hasta el año 1847, el convento de Monforte no fue ocupado y lo fue por los escolapios, mediante una autorización del entonces Ministro de Instrucción Pública y de Comercio, el insigne Pastor Díaz. Éste autorizó a los escolapios meramente para la posesión, para que utilizara el convento con fines de enseñanza, y hasta hoy han seguido recibiendo ésta o aquella subvención del Estado, sin que sean ni propietarios ni patronos, ni tengan relación alguna de propiedad ni de derecho con el edificio ni con nada de cuanto contiene. En esta situación, ¿cabe que el Estado se desentienda del Patronato que ha venido a él, primero por la incautación de la propiedad, y después por ausencia de patrono, ya que en el Ministerio de Gobernación no figura aquél, y cuando no existe desempeña el Patronato, el Estado, la Corona?*<sup>2676</sup>.

El diputado Soriano por su parte se cuestionaba el régimen patrimonialista del cuadro: *El cuadro famoso de Van der Goes ¿pertenece a la Casa de Alba, a los Escolapios o al Estado? Esta averiguado ya, tanto por las manifestaciones que ayer hizo el Sr. Duque de Alba, como lo que ha expuesto el Sr. Burell y por lo que anteriormente expuso en el Senado el Sr. Tormo, que ese cuadro no pertenece a los Escolapios. Quedaba en la duda si pertenecía al Duque de Alba o al Estado; yo entiendo que al Estado, pero desde luego se puede afirmar que el cuadro no pertenece de ninguna manera a los Escolapios. Porque, ¿cree S.S. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que los Escolapios de Monforte están en distinta condición hoy que los Agustinos de El Escorial, por ejemplo? Están en la misma situación, son habitantes accidentales de un edificio (...) por una concesión (...) Exactamente, en el mismo caso están los Escolapios de Monforte. ¿Es que los Agustinos del Escorial podrían mañana, Sr. Presidente del Consejo de Ministros, vender el retrato de Felipe II, hecho por Pantoja, o el maravilloso cuadro de El Greco que allí hay (...) Yo creo que no. Y así como los Agustinos no podían hacer eso en el Escorial, tampoco lo pueden hacer en Monforte los Escolapios. De manera que averiguado está que el cuadro no pertenece a los Escolapios y que no pueden venderlo, pero litigándose el pleito entre el Señor Duque de Alba y el Estado, yo creo, además que el cuadro pertenece al Estado. Burell reafirmaría la propiedad estatal del cuadro fundamentada en la disposición de 1889 en el que los Patronatos abandonados pasaban a formar parte del Estado: De suerte que este era un Patronato totalmente abandonado por la Casa de Alba, y S.S., que conoce toda la*

<sup>2676</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Sesión del jueves 13 de junio de 1912, p.3783.

*legislación relativa a estas fundaciones y sobre toda la última disposición del Sr. Dato de 1889, sabe perfectamente, de qué suerte los Patronatos abandonados recaen sobre la Corona, la que al mismo tiempo determina en qué forma puede reconstituirse*<sup>2677</sup>.

El presidente del Consejo de Ministros, Canalejas, en su interpelación recogería las tesis más progresistas que se estaba dando en torno a la concepción pública del Patrimonio Monumental, al defender que iba más allá de los intereses particulares de algunos comerciantes, entre los que citaba a los americanos: *Reciente está una venta pública en la cual hombres poderosísimos, millonarios yanquis, en buena liza, en noble puja han adquirido joyas artísticas de pintores franceses de la mayor estimación, que se han llevado allende el mar. Este es un fenómeno general que exige, cuando se trata de las relaciones libres de la contratación de ciudadanos (luego hablaremos de las Corporaciones, de la Iglesia y de otros Institutos), recabar del Parlamento ó créditos cuantiosísimos para que el Estado emprenda la defensa o una modificación de derecho que no puedo sospechar siquiera próxima, en virtud de la cual la propiedad individual deja de tener el sello y la garantía de tal propiedad individual cuando se refiere a la adquisición o a la tenencia de una joya artística*<sup>2678</sup>. Insistiría sobre la necesidad de revisar el derecho de propiedad de los bienes de interés histórico y artístico: *Yo ya sé que alborea en algunos tratadistas y se han insinuado en algunos Parlamentos la tendencia a considerar que el derecho de propiedad, cuando está encarnado, cuando está expresado, cuando está referido a una obra de arte es un derecho de propiedad contingente, cuya expoliación puede realizarse por la valoración que libremente establezca el Poder Público sin someterlo a la puja, sin guardar siquiera aquella preferencia del derecho de tanteo que otros tratadistas y otros Parlamentos establecen ya; pero en ninguna parte, ni en Italia, a pesar de los rigores de la Ley Pacca, se ha llegado a defender por completo la riqueza artística, y cuando se defiende es con grandes cantidades. (...) ¿Es que el Parlamento español considera que en las presentes circunstancias el Gobierno está capacitado para proponer la concesión de un crédito tan importante que habría de valorarse en bastantes millones de pesetas, para poner un dique a estas codicias que no llamaré antipatrióticas, porque, realmente hay familias que, rotas las antiguas vinculaciones, tiene por único capital, como único patrimonio, una obra de arte que hay que fraccionar entre varias ramas desgajadas de aquel tronco poderoso que, merced a la vinculación, conservaba grandes riquezas? ¿Es que a estas familias se las puede someter a la incapacidad de vender, ya que no se les puede expropiar sino a lo sumo en la forma de derecho de tanteo, con todos los inconvenientes que el derecho de tanteo tiene?; añadiendo a esta pretensión a aquellos que pertenecían a la Iglesia, y concretamente a las Fundaciones: (...) hay que empezar por establecer la relación entre el individuo poseedor de una obra de arte y el Estado ¿Es que entre estas instituciones puede olvidarse que descuella en primer término la Iglesia? ¿Es que no nos preocupa a todos desde hace muchos años esta compleja y singular situación de derecho de todo lo que constituye el patrimonio, la posesión o tenencia de objetos de arte por la Iglesia? Esto nos ha preocupado muy seriamente a nosotros, y tenemos que examinar*

---

<sup>2677</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Sesión del 15 de junio de 1912, p.3838.

<sup>2678</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Sesión del 15 de junio de 1912, p.3849.

*ante todo, si las relaciones singulares establecidas dentro del Concordato y en nuestro propio Código Civil con la Iglesia nos consienten movernos con aquella holgura que deseáramos.(...) Y luego viniendo a las fundaciones o a los institutos que no son religiosos, hay que examinar una distinción de derecho (...) Hay que determinar bien ese ente moral, esa personalidad jurídica, que es la fundación, y saber por quien está simbolizada y si prescribieron sus derechos o están vivos y en que conexión se encuentran con el Estado; y concretamente, respecto a este cuadro, cuáles son las complejas relaciones de derecho entre la fundación, el patrono y el Estado (...)*<sup>2679</sup>.

El diputado Soriano subrayaría el interés nacional de un bien de interés histórico artístico sobre el interés particular de su propietario a la hora de venderlo fuera de las fronteras nacionales, subyacendo una supremacía moral del interés del bien de interés histórico y artístico sobre lo puramente material, proyectado en el derecho del particular a vender: *En el caso que ha presentado S.S. hay dos cosas que bien ha distinguido. Se trata efectivamente, de dos aspectos de una misma cuestión: uno, por lo que respecta a la propiedad particular; otro, por lo que respecta a la propiedad del Estado. El segundo caso tiene indudablemente un aspecto moral más que un aspecto jurídico (...) En lo que toca a la propiedad particular respecto a las obras artísticas, también hay un aspecto indudablemente moral, que es el amor a la Patria, el amor a la tradición, el respeto a los que no legaron nuestros abuelos, que es, repito, una cuestión de orden puramente moral. Por eso distinguen en Italia y se distinguen en la humanidad, aquellos hombres que ponen sobre el nivel material de la vida el nivel espiritual, lo cual es muy lógico, y por eso se dio el caso, de que habiendo vendido el Príncipe Colonna el famoso retrato de César Borgia hecho por Rafael, y habiendo sido detenido en la Aduana, la nación italiana, que no dudó siquiera un momento del derecho del Príncipe Colonna, como particular a vender este cuadro, sin embargo, en el orden moral le lanzó una diatriba y no lo consideró tan digno ciudadano como otros que habían hecho cosa muy distinta. Refiriéndose al Duque de Alba precisaría: Su Señoría, como patrono, como dueño, como sea, podrá usar o no usar del cuadro; pero como duque de Alba y como español, no pude vender el cuadro. Esto diría yo, lo mismo que Italia dijo al Príncipe Colonna (...) la riqueza de un particular puede ser vendida; recientemente el Sr. Duque de Luna ha vendido dos Velázquez; yo no discuto el derecho que tenga a venderlos, como patriota lo lamento; yo hubiera querido tener dinero bastante para que el Sr. Duque de Luna no vendiera jamás esos Velázquez, pero es indudable que pudiera tener derecho*<sup>2680</sup>. Sin embargo, la actitud cambia en relación con un Patronato cuyo titular sea el Estado: *El caso de Monforte es totalmente distinto; no se trata de un particular; el Estado tiene derecho a que no se venda (...) El Sr. Duque de Alba no tiene derecho tampoco (...) Pero además se trata de un Patronato, habrá que discutir la eterna cuestión de los Patronatos, pero ese cuadro es del Estado, y el*

<sup>2679</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.139, Sesión de 15 de junio de 1912, p.3842.

<sup>2680</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.139, Sesión de 15 de junio de 1912, p.3843.

*Estado tiene medios sobrados para impedir que salga de España*<sup>2681</sup>. Curiosamente la minoría carlista, representada por el diputado Llosas, también se referiría a la venta del cuadro, definiendo una distinción entre el derecho de la propiedad particular y el interés nacional por el mismo: *he de sentar dos puntos capitales: Primero, el relativo a la propiedad particular. Nosotros a la propiedad particular le rendimos verdadero culto, verdadero respeto, ya se trate de propiedad individual, ya de otras personas jurídicas, como Corporaciones religiosas o civiles. Segundo (...) Respecto a arte, digo que, por nuestra parte, tendremos siempre sumo gusto en solicitar del Gobierno de la Nación, lo que sea necesario al objeto de procurar que las obras de arte no salgan de nuestro país, que tiene una envidiable tradición artística (...) Es necesario, pues, que siempre, por de contado, dentro del terreno del derecho y de la justicia, pongamos prudente empeño en que nuestras gloriosas obras de arte no realicen un deplorable éxodo al extranjero*<sup>2682</sup>.

Como podemos apreciar en la lectura del Informe del Consejo de Estado ya se contemplaba la autorización de la venta del cuadro: 1º. Que el Gobierno de S.M. solo podría evitar la venta del cuadro la Adoración de los Reyes, de Van der Goes, a comprador extraño, adquiriéndole él por el precio que estipulaba el contrato celebrado con el Gobierno alemán (...); 2º Que en el caso de que, por circunstancias que a dicho Ministerio corresponda apreciar, no considerase posible la adquisición del cuadro, levantase la prohibición, facultando al patrono para llevar a término el contrato. Los miembros del Consejo de Estado constituido por Maura, Rodríguez San Pedro, Marqués de Pidal, Allendesalazar, Ugarte y General linajes (Conservadores) y los consejeros de la Comisión Permanente Santos Guzmán, Villanueva, Aguilera, Cortezo, ostentando la Presidencia Pío Gullón. Finalmente, el 6 de febrero de 1913, siendo Ministro de Instrucción Pública, López Muñoz se levantaría por Real Orden la suspensión de salida del cuadro. En la propia Exposición de Motivos se incluía las causas primordiales que habían llevado a decretarlo, entre los que destacaba:

- 1º) La no existencia de ninguna *escritura fundacional de 1593 ni en la adicional de 1600, según dictamina el Consejo de Estado, cláusula que prohíbe expresamente a los patronos enajenaciones como la de que se trata, no se puede, ni a pretexto del protectorado que el Gobierno ejerce sobre las fundaciones benéficas de enseñanza, impedir que se venda el cuadro motivo del expediente, por el respeto debido al derecho de propiedad privado y a la voluntad misma del fundador, representada por el actual Patrono (2º),*

- 2º) que las manifestaciones escritas de carácter particular, *hechas por el Patrono al Ministro de Instrucción Pública, y especificadas y ampliadas oficialmente después como consecuencia de la Real orden de 21 de julio de 1912, aun no reconociéndose otro valor que el de un avance privado y explorador sobre la*

---

<sup>2681</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.139, Sesión de 15 de junio de 1912, p.3844.

<sup>2682</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.142, Sesión de 19 de junio de 1912, p.3956.



*adquisición del cuadro por el Estado, fueron el medio con el que llegó a tener el asunto su planteamiento oficial (3°),*

*- 3°) que en todo caso tales manifestaciones se hicieron y se determinaron en relación con el contrato de venta antes de la promulgación del Real decreto del ministerio de la Gobernación de 16 de julio del mismo año de 1910, sobre fundaciones benéficas, cuyo decreto obliga a obtener la autorización del Gobierno para poder enajenar los bienes pertenecientes a Institutos de beneficencia, de valor artístico o de significación histórica, aunque no tengan la condición jurídica de bienes inmuebles, lo cual significa que la aceptación de la compra del cuadro es un hecho que no pudo desvirtuado por disposiciones posterior a la aceptación misma(4°),*

*- 4°) que ante el requerimiento que les había sido dirigido a los Padres Escolapios de Monforte por Real Orden de 21 de junio de 1912, ponía de relieve que su intención fuera el de procurar la más amplia y debida realización pedagógica y moral de los generosos fines que el fundador de la Institución se propuso (5°),*

*- 5°) al mismo tiempo que por los documentos aportados por el expediente cumpliendo la disposición de la citada Real orden de 21 de julio de 1912, esclarecen la cuestión de que porel carácter de la fundación tenía o no el Patrono potestad para autorizar la venta del cuadro, punto que, de acuerdo con el expresado Cuerpo consultivo, debe resolverse afirmativamente (6°).*

*- 6°) Se consideraba que la circunstancia aducida por la Sección de Beneficencia del Ministerio de Gobernación (...) de que la fundación recibe subvenciones del Ayuntamiento de Monforte y de la Diputación de Lugo, por lo que no podía en consecuencia ser reputada como de carácter benéfico particular, conforme al artículo 5° del Real decreto de 14 de marzo de 1879, carecía de alcance para modificar la tesis sustentada en el Considerando anterior, ya que se reconocía que la Institución tuvo en sus comienzos aquel carácter, y de los datos de su informe resulta que todavía, al darse cumplimiento a la Real Orden de 4 de mayo de 1909, se seguía reputándola por el gobernador de Lugo y por el Ministerio de la Gobernación como sujeta a la Instrucción de 1839, esto es, de carácter benéfico particular; por lo que las dudas que suscitaran, como todas las que surjan sobre el carácter público o particular de una fundación benéfica, darán lugar a que se instruya expediente para su clasificación en los términos del art.57 de la Instrucción de 12 de marzo de 1899 y del 5° del Real decreto de 25 de octubre de 1908, es decir, con audiencia de los representantes de la fundación y de los interesados en ella (7°).*

*- 7°) Una vez reconocida la potestad del Patronato para autorizar la venta, se dejaba de considerarse perfeccionado el contrato verificado el 25 de mayo de 1910, mediante la entrega por el comprador Sr. Greter de un anticipo de 50.000 pesetas y el libramiento por el Rector del Colegio de un recibo, en el que declara estar autorizado por sus superiores para firmarlo, manifestando que será nulo y no valedero el contrato si el Duque de Alba, que es el Patrono del Colegio de Monforte, rehusa dar su autorización por escrito para la venta del cuadro, en cuyo caso devolverá al Sr. Greter el anticipo a cuenta de 50.000 pesetas, entregadas a nombre del Gobierno de Prusia, en razón a que, por escritura pública de 8 de junio de 1910, el Patrono otorgó la autorización expresada, sin que el hecho de haberla revocado en 27 del mes siguiente modifique la situación en cuanto al valor que ha de atribuirle el Gobierno, necesitado de formar un concepto que le sirva de guía en sus resoluciones, pero incompetente de hecho para definir el alcance jurídico de los actos de las personas privadas (8°).*

-8º) El único medio a oponerse a la venta del cuadro sería mediante su adquisición por el Tesoro, pero las circunstancias económicas del momento se lo impedirían, *con lo cual sería punto menos que imposible armonizar el gasto enorme que supondría la adquisición de obras que alcanzan hoy en el mercado artístico precios fabulosos, de cuya suma total puede dar idea la ofrecida por el Gobierno de Prusia para adquirir el cuadro de Van der Goes, siendo esta de consideración que ha aconsejado al Gobierno no entrar por ese camino, si es que era todavía hora de emprenderlo, y la misma que indudablemente ha tenido en cuenta el Poder legislativo, el cual en su alta sabiduría, no ha reclamado del País tales sacrificios, en ocasión en que altos prestigios de su seno en ambas Cámaras, inspirados por ideas nobilísimas, llamaban la atención de la opinión pública y del Gobierno para que se tutelasen los intereses artísticos de la Nación, sin que ello obste, ante bien, invita a la realización de los propósitos del Gobierno, que aspira a buscar en una ley general lo que por créditos especiales sería imposible obtener con la debida unidad de criterio (9º).*

Antes tales motivos se dispondría: 1º Que fuese levantado la suspensión de la salida de Monforte del cuadro de Van der Goes y su constitución, en depósito; 2º Que fuese incoado el expediente para clasificar la Institución del Colegio de Monforte y 3º) Que se ejercieran en todo caso sobre *el precio si se consumara la venta del cuadro, las facultades inherentes al protectorado del Gobierno*<sup>2683</sup>. El 24 de febrero de 1913 el Gobernador de Lugo comunicaba al rector de los Escolapios de Monforte la Real Orden por el que se levantaba la suspensión de la salida del cuadro. Unos días después, con la promulgación de la Real orden del 14 de marzo de 1913 se resolvería el expediente relativo a la clasificación de la Fundación tal como había establecido el artículo 2º del Real decreto de 6 de febrero de 1913, por la que se resolvía que 1º) *Que se declarase que la institución a que se viene haciendo referencia, y en cuanto a su función docente es de beneficencia particular* y 2º) *Que dicha resolución fuesen comunicadas al Ministerio de Hacienda para su conocimiento y el de las Direcciones que del mismo dependan, al Gobernador de la provincia respectiva, a la Junta provincial y a cuantas oficinas públicas o particulares puedan afectar el acuerdo. Por su parte, sería promulgada la Real orden del 23 de octubre de 1913 declarando si habían sido o no legales las condiciones en que la fundación de beneficencia particular de Nuestra Señora de la Antigua, de Monforte, tiene concertada la venta del cuadro de Van der Goes, por lo que se dispondría que debían aprobarse por el Protectorado las condiciones propuesta por el Patrono de la fundación de beneficencia particular de Nuestra Señora de la Antigua, de Monforte, para que se consigne en la escritura de venta del cuadro de Van-Der-Goes, que representa la Adoración de los Santos Reyes, debiendo invertir el producto de la venta en inscripciones intransferibles a nombre de la Fundación.* En octubre de 1913 se formaliza la venta, en cuyas cláusulas se especificaba el precio que fue de 1.180.000 francos, la inversión de la rentas adquiridas con la venta, cuyo producto íntegro se invertiría en la compra de láminas intransferibles a nombre del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de

---

<sup>2683</sup> DIAZ FERREIROS, Juan, 1993-1994, p.94.

Monforte, que se depositarían en el Banco de España, cuyas ganancias se destinaría a la urgente reconstrucción de la parte ruinosa del edificio y a la restauración del mismo<sup>2684</sup>.

**- La autorización a los Patronatos de la Fundación para vender objetos artísticos.**

En algunas ocasiones eran autorizados los Patronos de las Fundaciones Religiosas o de Beneficencia a vender sus objetos artísticos, en conformidad con los informes de las Comisiones de Monumentos o las Reales Academias, como es el caso de la Real orden de 19 de febrero de 1915 autorizando al Duque de Parcent, Patrono de la Fundación Hospital de Nuestra Señora de la Anunciación, de Avila, para vender seis altares barrocos y restos de un órgano pertenecientes a la misma, fundamentándose su visto bueno *para evitar la completa destrucción de esos objetos de escasa importancia y ningún valor artístico, y en conformidad con los informes del Museo Arqueológico Nacional y Comisión Provincial de Monumentos de Avila.*

**4.1.4. La regulación eclesiástica de la venta de bienes religiosos de interés histórico-artístico.**

Desde principio del siglo XX se van a ir dando una amplia disposición normativa por parte de las autoridades eclesiásticas en torno a la enajenación de bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico, ya que se había convertido en una práctica muy frecuente la venta por parte de un gran número de párrocos con el objeto de cubrir los gastos de culto y conservación de los propios templos. Un gran número de obispados y arzobispados españoles, siguiendo las distintas directrices del propio Papado, enviaron sendas circulares a sus respectivos prelados de las diócesis, más con un interés espiritual de conservación de estos bienes que con un sentido de protección monumental, aunque no cabe duda que cumplieron un papel primordial en la concienciación patrimonial de estos primeros años del siglo XX, más aún cuando en muchos casos el propio Estado no intervenía. La **Circular de 18 de septiembre de 1906 del Obispo de Madrid-Alcalá** prohibiendo la venta de los objetos religiosos de interés histórico-artístico a los diocesanos puede constituir un modelo de otras enviadas en las distintas diócesis españolas. Ya en el preámbulo se expone la práctica extendida en el ámbito español por parte de mucho párrocos de la enajenación de *ornamentos, muebles y vasos sagrados que por su mal estado de conservación u otra causa están fuera de uso en las iglesias, que en muchas ocasiones pasaban por ser objetos inservibles, al parecer inútiles, por los cuales, sin embargo, al poco tiempo, y convenientemente restaurados, se han ofrecido grandes cantidades, que proporcionan pingües ganancias a los dedicados a esta clase de negocios.* Se precisa de esta manera la prohibición de la Iglesia del

<sup>2684</sup> DIAZ FERREIROS, Juan, 1993-1994, p.95; ONECA, NICETO El cuadro de Van der Goes, *La España Moderna*,

tráfico de obras eclesiásticas, incluso sancionando aquellos párrocos y diocesanos que lo hicieren: *No olviden los Señores Sacerdotes, que no solamente no están facultados para hacer esas enajenaciones de bienes eclesiásticos, que como tales se han de considerar los objetos arriba indicados, sino que incurren los que tal hagan, según la Constitución Apostolicae Sedis, en excomunión lata sententia no reservada.* De esta manera la enajenación sería precisa la licencia de la Santa Sede, estando, sin embargo, los Obispos facultados por el capítulo Terruias para autorizar la venta de los de poco valor. Por objeto de escaso valor se entenderían siguiendo las prescripciones de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares declaró en 22 de mayo de 1611 aquellos cuyo precio no exceda de veinte escudos de oro, cantidad que equivale próximamente a 300 libras italianas, a lo que se añadiría que en la necesidad, pues, de determinar con alguna fijeza la cantidad de bienes eclesiásticos cuya venta pueda autorizarse por los Obispos, diremos, siguiendo la opinión de los más acreditados teólogos, y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda, efecto de las vicisitudes de los tiempos, que solo puede autorizarse la de aquellas cosas muebles e inmuebles cuyo valor no exceda de quinientos francos; en los demás caso hay que recurrir a la Santa Sede. Por consiguiente, se establecía que siempre que hubiera necesidad de vender algo perteneciente a la Iglesia, fuesen consultado previamente a la autoridad pertinente, informando con nota detallada y minuciosa del objeto de que se trate, que Nos, después de oído el parecer de personas peritas, resolveremos lo que sea procedente, ya autorizando la venta, si esta dentro de Nuestras atribuciones, ya, en caso contrario, elevando a Su Santidad las preces oportunas pidiendo dicha autorización. Para tener un mejor conocimiento de los bienes eclesiásticos que hubiese en el templo se establecía la necesidad de elaborar un inventario de objetos tanto de usos como inservibles, existentes en las iglesias, con el fin de dificultar en lo posible tales ventas. Los inventarios se harán por duplicado, quedándose una copia en el archivo de la iglesia.

**La Circular del 21 de junio de 1914** dirigida a Cardenales, Arzobispos y Obispos de España, preceptuando reglas para la custodia y conservación de cuantos objetos de valor histórico o artístico existan, sin excepción, en todas las iglesias españolas representa un hito importante en el ámbito de la concepción pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico. La importancia que suponía la amplia riqueza artística que poseía la Iglesia no debía ser ajena a su propia tutela, más aún al cumplir la función espiritual que por ello había sido adquirida: *La Iglesia Católica, que coloca el perfeccionamiento del hombre en conocer y amar a Dios, suprema Verdad, sumo Bien y Belleza Infinita, entre los esplendidos lauros conquistados en el palenque de la civilización, reconocidos aun por sus adversarios, ostenta el de haber promovido e informado con nueva vida las Bellas Artes y la Historia, destinadas por su naturaleza a exhibir las maravillas de la creación y los acontecimientos humanos dirigidos por la Providencia divina. Los merecimientos de la Religión Católica, que a grandes rasgos acabamos de insinuar, adquieren especial relieve al otear el diorama artístico de la Iglesia española ¿Será preciso enumerar aquí las obras maestras que vuestros mayores os legaron? ¿No hicieron de vuestras imponentes catedrales y de los severos monasterios síntesis de*

*las artes y veneros inagotables para la erudición? ¡Cuánta riqueza de pinturas, esculturas, encajes, orfebrería y filigranas! ¡Cuánto acopio de pergaminos, incunables y vitelas! ¿No hablan con harta elocuencia todos esos tesoros artísticos y documentos históricos que son admiración de los doctos y legítimo orgullo vuestro? La misión espiritual que conllevaba estas riquezas debía que corresponder con una debida conservación, que en la mayoría de los casos no podía desempeñar la propia Iglesia por la falta de los medios económicos adecuados: Para que se la conozca en la íntima y genuina indiosincracia de su compleja alma nacional, hay que preocuparse con exquisita solicitud de conservar esa herencia de los siglos que, a pesar de las vicisitudes de los tiempos, posee la Iglesia en su parte mayor y más preciosa, y a que hasta la cultura hispano-árabiga toca de derecho al catolicismo. Ahora bien: si el clero español, por las condiciones económicas en que hoy vive, no puede sino con grandes sacrificios acrecentar ese espléndido legado de la piedad cristiana, puede fácilmente y debe a todo trance conservarlo y transmitirlo avara e íntegramente a las generaciones venideras. De esta forma se hacía un llamamiento para que por parte del propio clero fuera respetado el legado patrimonial que se conservaba en el interior de los templos: ¿Y será posible que a tantos intereses no correspondiesen los ministros del Santuario y diesen así pretexto a los calumniadores de la Religión para señalarlos como negligentes poseedores de los ilustres títulos y blasones de su grandeza? ¿Será posible en España la enajenación de retablos, de cuadros, de joyas y de telas admirables, unos por su valor artístico, otros por su mérito arqueológico, para reemplazarlas con altares sin estilo, con pinturas sin gusto, con ornamentos y vasos de relumbrón, hoy vistosos y relucientes, mañana desteñidos y arrumbados? ¿Sería tolerable que por motivo de restauraciones y composturas, o por descuidos e indolencia, desaparecieran o se deteriorasen inscripciones, datos y documentos esparcidos en los templos, conventos y demás recintos eclesiásticos?.*

De esta manera se dispondría por parte de las autoridades eclesiásticas que todos los objetos de valor artístico o histórico, perteneciente a entidades eclesiásticas, serán custodiados con el mayor esmero, como depósito sagrado (1º), subrayando de esta manera el valor espiritual que significaba estos bienes. Se llegaba incluso a precisar que *ni aún los que a primera vista parecieren insignificantes podrán ser conmutados ni vendidos bajo ningún pretexto* (2º), intentando evitar de esta manera cualquier enajenación indebida. En el caso de que para remediar necesidades perentorias fuera preciso vender o conmutar alguno de esos objetos, *la venta o conmutación no podrá efectuarse sino con el previo permiso escrito de la competente autoridad eclesiástica, la cual no lo dará sin plena garantía de que no han de ser exportados a territorios extranjeros* (3º). Quedaría limitado toda práctica de restauración en los indicados objetos y en los edificios eclesiásticos sin el dictamen de personas peritas y sin la seguridad de acertada ejecución (4º). Sería confeccionado un inventario de todos los objetos preciosos y documentos históricos por los rectores y administradores de edificios eclesiásticos, que serían remitidos una copia de los mismos a sus respectivos Prelados (5º). Se daría acceso para la investigación los archivos capitulares y aun parroquiales que poseen códices y



documentos importantes, siempre que se tuviera las debidas cautelas y precauciones (6º). La Circular terminaba indicando la necesidad de iniciar en los estudios de arqueología y paleografía a los eclesiásticos que estuvieran a su cargo dichos objetos, con el objeto de que se *encontrasen en las mejores condiciones de apreciar el valor de los tesoros confiados a su custodia*, al mismo tiempo que se encargaba al clero que dedicasen parte de su tiempo libre y de su actividad al estudio de las curiosidades históricas y artísticas de sus templos y archivos, para que tuvieran noticias de su existencia sus respectivas Curias episcopales, con el fin de que fueran salvadas del olvido con su publicación en Memorias, folletos y Boletines diocesanos, para contribuir al incremento de la cultura nacional.

#### ***4.2. La cesión del Estado de los antiguos conventos desamortizados a los ayuntamientos para uso público.***

El destino de los antiguos conventos desamortizados que seguían en poder del Estado siguió siendo uno de los problemas más frecuentes con que se tenía que enfrentarse las instituciones públicas durante el reinado de Alfonso XIII, ya que muchos de ellos estaban abandonados. En muchas ocasiones sería denunciada por las Reales Academias la incidia con que habían actuado las instituciones administrativas en la conservación de estos inmuebles, más aun cuando intrínsecamente existía una tutela pública sobre los mismos. La falta de una cuantía económica consignada en los presupuestos generales impedía en muchos casos actuar de manera debida sobre estos inmuebles por lo que se incrementaba el problema. Como medida de solución adoptó la cesión de los antiguos conventos a los ayuntamientos para su uso público, donde serían instalados en los mismos todo tipo de establecimientos administrativos, desde escuelas públicas a museos, que se superpondrían a la conversión en cuarteles que había caracterizado en las etapas anteriores. La cesión de dominio se haría siempre por Ley, y en el caso de que hubiera algún interés histórico y artístico a la que había que respetar se incluía en el expediente de cesión los informes de las Reales Academias de las Bellas Artes y de la Historia, por lo que la institución que adquiría en cesión el inmueble tenía que comprometerse a respetar la parte artística que debía de ser conservada del edificio. En la **Ley de 12 de enero de 1915** autorizando al Ministro de Hacienda para ceder al Ayuntamiento del Puerto de Santa María gratuitamente el edificio denominado Basílica de San Juan de Letrán, en su artículo 2º se establecía que debía de ser respetado, *sin destruirlas, las partes artísticas que a juicio de la Comisión provincial de monumentos merezcan conservarse*. Si en el plazo de cuatro años no hubiere dado el Ayuntamiento la aplicación que preceptúa el artículo anterior, revertirá al Estado la propiedad del solar y del edificio a que se refiere esta ley (art.3). En la mayoría de las ocasiones se autorizaba a que las instituciones municipales podían hacer *las obras que estime necesarias y convenientes para el mejor aprovechamiento de la propiedad cedida*, como así aparece reflejada en la **Ley de 1º de junio de 1912** cediendo al Ayuntamiento

de Adeje (Canarias) el ex convento de San Francisco. En muchas ocasiones no se cumplieron el compromiso de respetar la identidad artística del edificio lo que supondría una consiguiente pérdida patrimonial.

#### ***4.3. Los límites de la restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico: La reiteración del conflicto Estado-Iglesia.***

La Restauración del Patrimonio Monumental Eclesiástico siguió siendo objeto de controversia en el ámbito de la tutela pública sobre aquellos bienes inmuebles donde se entrecruzaban intereses espirituales y valores histórico y artístico. Las continuas llamadas de atención de la Real Academia de San Fernando y las Comisiones Provinciales de Monumentos sobre las presuntas restauraciones que se estaban haciendo sin autorización dio lugar algunas disposiciones legales en las que se prohibía toda intervención sin su correspondiente autorización como fue el caso de la Real orden de 20 de marzo de 1905 por el que debe cesar en la Basílica del Pilar (Zaragoza) cualquier obra no autorizada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza, al haber sido declarada Monumento Nacional. Unos meses antes se habría promulgado la **Real orden-circular de 14 de enero de 1905** disponiendo que se estableciera en todo su vigor el Real decreto de 13 de agosto de 1876 y la Instrucción del 28 de mayo de 1877, sobre reparación extraordinaria de templos y edificios eclesiásticos. En su Exposición de Motivos ya se incluían los problemas que habían ocasionado la política tutelar de la restauración de los edificios religiosos, bien por falta de crédito presupuestario, el problema que planteaba el mismo trámite administrativo que debía de ser cumplido, que resultaba *infructuosa en muchos casos la aprobación de los proyectos y la concesión de subvenciones, ante la imposibilidad de garantizar debidamente la parte o tanto por ciento que en cada caso corresponde a las iniciativas locales, e incluso el abuso que se había llegado en la utilización de los créditos a pesar de que incluso en la Ley de presupuestos, en su art.22, había prohibido que contrajeran obligaciones superiores al crédito legislativo a ellas destinado.*

##### **4.3.1. El Real decreto de 19 de abril de 1915 relativo a la construcción y reparación de templos y demás edificios eclesiásticos.**

Los hechos demuestran que no se pudo paliar los problemas de financiación y organización administrativa en el ámbito tutelar del Patrimonio Monumental Eclesiástico, por lo que se promulgaría el **Real decreto de 19 de abril de 1915** relativo a la construcción y reparación de templos y demás edificios eclesiásticos, constando de un amplio articulado, 76 artículos, donde nuevamente se conjugaban la potestad pública y eclesiástica. Las obras de construcción y reparación se dividirían en ordinarias y extraordinarias (art.1), considerándose ordinarias las que en cada *año hubiera necesidad de hacer para tener los edificios en buen estado de conservación, y pueden costearse con las dotaciones consignadas para gastos de culto y sostenimiento de los Seminarios conciliares en los artículos 34 y 35 del Concordato de 1851, con la parte de la renta*

*de las Sillas episcopales vacantes, que conforme al art.37 del mismo Convenio, debe emplearse en reparar los Palacios de los Prelados, y con las limosnas de los fieles (art.1.2), y extraordinarias las que no pudiendo hacerse con los medios indicados, deben sin embargo ser costeadas por el Estado, en cumplimiento del art.36 del Concordato y del 13 del Convenio adicional de 1859(art.1.3). Las obras que se hicieran sin subvención del Estado, se considerarían como ordinarias para los efectos de este decreto (art.1.4). En aquellas obras de Templos parroquiales, Conventos, Catedrales, Seminarios, Palacios Episcopales, etc., y las de construcción de estos edificios que no contara con subvención del Estado, se harían por los respectivos Cabildos, Párrocos, Prelados y Superiores, bajo la autorización y vigilancia de los propios ordinarios, por lo que el Estado no tendría en estas obras más intervención que la que le corresponda por las disposiciones generales de Policía urbana (art.2). Como podemos comprobar, la intervención del Estado dependía de la asignación presupuestaria en la que hubiera participado, que en caso contrario quedaba reducida a las correspondientes a las normas urbanísticas de carácter general.*

Las obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos, se contrataría en pública subasta (art.4), aunque dejaba la posibilidad de hacerlo por administración o por contrata sin subasta, en el caso de restauración artística que, oídas la Junta diocesana, la Comisión provincial de Monumentos y la Real Academia de San Fernando, se disponga que se hagan por administración (art.4.3). Se nombraría una Junta diocesana de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos, para auxiliar al Gobierno en la instrucción de obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y demás edificios destinados al servicio de la Iglesia, y para velar por su buena ejecución habrá en la capital de cada Diócesis, que estaría compuesta del Prelado, y en Sede vacante o impedida, del Gobernador de la Diócesis, Presidente; del Deán; de un Canónigo, elegido por el Cabildo; de un Párroco, con residencia en la población, designado por el Prelado; de un representante del Ministerio público, designado por el Fiscal de la Audiencia respectiva; del Síndico del Ayuntamiento y de un individuo nombrado por la Comisión provincial de Monumentos (art.5). En caso de que la obra tuviera que hacerse fuera de la capital de la Diócesis, podría crearse, una Junta especial, dependiente de la diocesana (art.6°), que sería presidida, si la obra hubiera de hacerse en su Colegiata por el Abad; si en una parroquia, el Párroco; si en un Palacio Episcopal, la persona que el Prelado designe; si en un Seminario, el Rector (art.6.2). El Gobierno podría nombrar los individuos de la Junta si así lo requiriera la importancia de la obra y de la población donde haya de ejecutarse, cuidando de que en ella tengan representación la Iglesia, el Municipio y los que contribuyan con sus limosnas (art.6.3). Sería prohibido toda obra de reparación extraordinaria realizada en los templos y en los edificios destinados al servicio de la Iglesia, sin previa autorización Real (art.11). Para examinar los expedientes elevados por las Juntas diocesanas, se constituirá en el Ministerio de Gracia y Justicia una Junta central, compuesta del Subsecretario, Presidente

y de los Jefes de las Secciones de asuntos eclesiásticos y de construcción y reparación de templos (art.15). Al Ministerio de Gracia y Justicia corresponde aprobar los proyectos de obras y acordar su ejecución (...). También se oiría, en los casos en que la importancia artística de la obra lo requiriera, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (art.30). Se limitaría la libre acción de la ejecución de las obras por lo que las Juntas diocesanas, y las especiales en su caso, debían de velar de que las obras que fuesen ejecutadas con sujeción al proyecto aprobado y a las condiciones estipuladas, dando aviso al Arquitecto o al Gobierno, según proceda, de las faltas que se advirtieran (art.41), aunque en las obras cuyo presupuesto no excediera de 5.000 pesetas podría el Arquitecto-Director, bajo su responsabilidad, hacer en el proyecto las alteraciones que en el curso de la ejecución aparezcan convenientes, con tal que no produzcan aumento de gastos, no pudiendo por el contrario en las obras cuyo importe se hubiera calculado en más de 5.000 pesetas, y siempre que la modificación eleve la cifra del presupuesto, que necesitaría de una Real autorización. Tampoco podrá hacerse modificación alguna sino en virtud de Real orden en los proyectos sobre que haya dado dictamen la Real Academia de San Fernando (art.42).

En la lectura de los informes de la Real Academia de la Historia y de las Comisiones de Monumentos se refleja cómo la tutela pública iba incidiendo paulatinamente sobre el ámbito de la restauración del Patrimonio Eclesiástico Monumental. En el Informe de 19 de septiembre de 1915 de la Comisión de Monumentos sobre la actuación que se había realizado en la Cartuja de Miraflores a instancia particular y con el beneplácito de la comunidad religiosa sin la autorización pública pertinente. Las Comisiones de Monumentos gozaban de la potestad pública de inspeccionar todas las obras de restauración que se habían realizados en aquellos bienes muebles e inmuebles que hubiera sido reconocido su interés histórico y artístico: *En la Junta del día 13 del actual mes esta Comisión, acordó, en vista de los rumores que por Burgos circulaban de que faltaban en el Monasterio de la Cartuja algunos objetos artísticos y se habían emprendido la restauración de algunas estatuas de las que decoran el maravilloso sepulcro de Julio II, realizar una visita a aquel insigne monumento (...)* Al día siguiente 14 se trasladó en pleno a la Cartuja, y de labios del Padre Procurador, oyó, que en efecto, un escudete de hierro primoroso, que primero estuvo en la puerta exterior del Monasterio (...). La libre disposición de un bien para ser restaurado por una comunidad religiosa o en este caso un particular, el Conde de las Almenas, quedaba en entredicho sin la consiguiente inspección y autorización pública: *Que igualmente y por el propio Sr. Conde se había llevado a Madrid para que fuesen restaurados dos ó tres estatuas de las del sepulcro central, que una o dos habían vuelto arregladas, pero otra tercera aún continuaba en Madrid, sin que supiera quien fuese el artífice que llevaba a cabo la restauración, y que con todo esto lo permitían hacer los monjes en virtud de licencia (...)* para que el Señor Conde de las Almenas pudiera hacer en la Cartuja cuanto redundase en mejor decoro y esplendor del Monumento. Enterada así la Comisión de cuanto ha ocurrido (...)

*reuniose de nuevo la junta el día 17 acordando unánimamente que (...) haga que vuelva a la Cartuja la pieza de hierro de que se ha hecho referencia y que por lo visto guarda en Madrid el Señor Conde de las Almenas y la estatua que también ha llevado y ordene a la Comunidad de Miraflores que, en lo sucesivo, no permita que, sin la previa censura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se realicen obras semejantes de restauración. En el propio Informe se recordaba el papel que las Comisiones de Monumentos debían desempeñar en el ámbito de la restauración de los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico: No cree necesario esta Comisión hacer presente a V.E. cuyo claro talento, desde luego ha de comprender la razón que asiste, que es para ella obligación estricta que su reglamento la impone, la de reclamar contra toda obra que en cualquier edificio público, sea civil o religioso, se haga y que pueda perjudicar a su valor artístico e inútil parece deseo que pocos monumentos son como la Cartuja, no vendida precisamente en los tiempos de la exclaustración de religiosos en atención a su mérito excepcional, colocada luego bajo la custodia de la Comisión de Monumentos, y entregada más tarde a la Mitra para que fuese atendida y cuidada, acreedores al mayor celo para que subsistan completos y no se toquen por manos inhábiles, y que dentro de la Cartuja (...) En estos saludables principios de respeto al monumento han venido inspirándose hasta hace poco requiriendo benévolamente el consejo de esta Comisión cuando pretendía realizar alguna obra, por insignificante que fuese, y en estos principios se informa hoy, como V.E. sabe mejor que nadie, la Iglesia Católica que con tanto interés quiere en nuestros días conservar las obras de arte de los tiempos pasados. Se recordaba como desde las propias autoridades eclesiásticas se instaba a la protección del Patrimonio Eclesiástico Monumental, especialmente en el campo de la restauración: Apenas hace un año que V.E. publicaba en el Boletín Eclesiástico, las sabias y oportunas disposiciones que contenía, la circular que el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico en España dirigió al Episcopado en 21 de junio de 1914, en la cual se ordena la conservación de objetos artísticos se prohíbe que se conmutadas ni vendidos, se establece que cuando fuera preciso, por necesidad perentoria, vender o conmutar alguno, no se haga sin permiso escrito y sin plena garantía de que no ha de ser exportado al extranjero, y muy especialmente que, ni en dichos objetos, ni en los edificios, se practicarán restauraciones sin dictamen de personas peritas y sin la seguridad de acertada ejecución.*

Los problemas de asignación presupuestarias se intentarían restablecer con la publicación de continuas disposiciones como la **Real orden circular de 27 de junio de 1917** por el que se disponía que las Juntas diocesanas eleven a este Ministerio antes de 30 de septiembre del año actual, y de una sola vez, todos los expedientes formados y aprobados para la construcción y reparación de templos y otros edificios eclesiásticos de sus respectivas Diócesis. Como indicaba la Exposición de Motivos, uno de los fines primordiales que se propuso el Ministro autorizante al someter a la aprobación de S.M. el Real decreto de 19 de abril de 1915 fue el *restablecer la más genuina interpretación de los artículos 36 del Concordato de 1851 y 13 del Convenio adicional de 1859 con la mira puesta en impedir el arbitrio discrecional en el otorgamiento del favor al hacerse la distribución del crédito consignado en los Presupuestos*



*del Estado para atender a la construcción y reparación de templos y otros edificios eclesiásticos. Sería delimitado un procedimiento administrativo siguiendo las disposiciones del Real decreto de 19 de abril de 1915, por lo que Las Juntas diocesanas debían de elevar al Ministerio antes del 30 de septiembre, y de una sola vez, todos los expedientes formados y aprobados para la construcción y reparación de templos y otros edificios eclesiásticos de sus respectivas Diócesis (1º); En los expedientes debían de acompañarse de una relación general comprensiva no sólo de los que con ella se remitan, sino de todos los formados y enviados con anterioridad, cualquiera que sea su fecha, cuyas obras no estuvieran comenzadas o solo parcialmente se hayan ejecutado (2º); Que en vista de las mencionadas relaciones de expedientes y de los expedientes mismos, sería la Junta Central del Ministerio la que formulara, dentro del año actual, la propuesta de las obras que hayan de efectuarse con cargo al presupuesto de 1918 (3º) y que la Junta Central, cumpliendo en todas sus partes las disposiciones del Real decreto de 19 de abril de 1915, se abstuviera de hacer extensiva su propuesta de ejecución de obras a los edificios pertenecientes a las diócesis que no hubieren cumplido exactamente los preceptos de aquella soberana resolución y las instrucciones de la Real orden circular de 24 de junio de 1916 (4º).*

#### **4.3.2. El Real decreto de 30 de abril de 1918 sobre restauración de templos y otros edificios religiosos.**

Con objeto nuevamente de paliar los problemas de designación de aquellos bienes inmuebles eclesiásticos que debían de ser restaurado se promulgó la **Real orden circular de 20 de abril de 1920** por la que se disponía que todas las Juntas diocesanas de la Península debían de remitir una relación comprensiva de aquellos templos que fueran verdaderamente apremiante el término de su construcción, o demandasen, por su estado ruinoso, una reparación urgente e inmediata. En la Exposición de Motivos se haría hincapié en los problemas de asignación presupuestaria: (...) *Se presenta ocasión oportuna para poner de manifiesto el poco resultado práctico que en la inmensa mayoría de los casos produjo el criterio hasta aquí seguido en la distribución del crédito disponible, pues si bien es cierto que las concesiones hechas alcanzaron a muchos templos, también es que la cantidad reducida de aquellas no mejoró, de una manera ostensible, la construcción ya empezada o la reparación emprendida, aparte de recaer frecuentemente en localidades que disponían de más de un templo para la celebración del culto y no ser perentoria en extremo la necesidad de otorgarla. De ahí que el Ministro que suscribe, inspirado en el mejor deseo de que la acción tutelar del Estado resulte lo más provechosa y fructífera posible, dentro de este orden de atenciones, estime preferible el mayor número de concesiones el que la cantidad por que se acuerden sea más proporcional a la necesidad que trata de remediar y que se reserven con preferencia para los casos en que concurran dos condiciones especiales: que no haya más iglesias en la localidad donde se halle enclavada o esté su construcción interrumpida y sea igualmente notoria y pública la urgencia de su reparación o terminación. Se subrayaría el papel predominante que debía jugar las Juntas Diocesanas, que eran las que realmente pueden ilustrar acerca de las*

*reparaciones que no admiten espera o de las construcciones que urge activar (...) Dado el celo que se distingue a las referidas Juntas, aparte del que es peculiar a sus dignísimos Presidentes cuando del bien de la Iglesia se trata, no es de temer que aquellas demoren más del tiempo preciso para adquirir los datos sobre los que han de basar sus limitadas propuestas e informes, el facilitar a este Ministerio lo que a su vez necesita para la más justa aplicación del crédito relativo a construcción y reparación de templos (...).*

### **5. La protección jurídica y administrativa del Patrimonio Arqueológico Español a principios del siglo XX. La Ley de 1911 y el Reglamento de 1912.**

Ignacio Calvo en su artículo dedicado a la ciudad celtibera de Termes elogiaría las numerosas excavaciones arqueológicas que se estaban produciendo en el ámbito español hacia 1913, reflejo de las disposiciones legales insertadas en la nueva ley de 1911: *El indudable avance cultural de España hacia todos los nuevos horizontes del humano saber, tiene en estos tiempos, y entre otros muchos, (...) Este matiz simpático del campo de nuestra moderna cultura es el referente a las excavaciones arqueológicas que con tan brillante resultado se están realizando en España desde hace algunos años; ya por cuenta de particulares, ya por cuenta del Estado, que, con el fin de encauzar dichos trabajos, tuvo la idea acertadísima de crear oficialmente una Junta superior de Excavaciones, que con su Reglamento y felices disposiciones, ha conseguido abrir un camino firme, por el cual ya ha avanzado el noble empeño de arrancar páginas de la historia en todo sitio donde el olvido y la desidia las tienen enterradas. Páginas gloriosas de la España Antigua eran nuestras ciudades: Mérida, Numancia, Itálica, Uxama, Medina-Azahara y otras, y cuando las sombras de las incertidumbres venían a ennegrecer su fama, las excavaciones arqueológicas encendieron en ellas un foco de luz que hizo resurgir en su antigua grandeza*<sup>2685</sup>. Por el contrario otros eruditos como Amador de los Ríos alentando de la parca aplicación de la ley en su famoso artículo publicado en 1915 en la Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos con el título Notas arqueológicas. Antigüedades salvadas, perdidas y en peligro: *Hoy que existen tantas Sociedades, subvencionadas o no por el Estado, y que procuran la conservación de Monumentos y estudios de las Artes y de las Industrias de todos los tiempos; hoy, que existe una Ley de Excavaciones y Antigüedades, -que carece de sanción penal, que nadie cumple y que en ocasiones de aplicación práctica imposible; hoy, que parece inspirar interés en ciertas clases sociales las antiguallas; no será mucho llamar la atención de quien puede (si tiene la fortuna de ser leídas por el Ministro del Ramo), para evitar el despojo de que es víctima incesante España con relación a su caudal arqueológico, tan desatendido en el Presupuesto y tan olvidado en él, aunque la experiencia me tiene constantemente demostrado que toda voz en defensa de aquel caudal es, por desventura, vox clamantis in deserto*<sup>2686</sup>. En la historiografía jurídica contemporánea, la ley ha sido objeto de numerosas críticas, como podemos

---

<sup>2685</sup> CALVO, Ignacio “Termes, ciudad celtibero-arevaca”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tercera Epoca, Año XVII, Tomo XXIX, julio a diciembre de 1913, Madrid, 1914, pp.374-375.

<sup>2686</sup> AMADOR DE LOS RÍOS, R. “Notas arqueológicas. Antigüedades salvadas, perdidas y en peligro”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, T.33, Madrid, 1915, 1.

apreciar en los estudios de Moreau sobre los problemas jurídicos generado en el ámbito del derecho español sobre la ocupación, el hallazgo y el tesoro, que al referirse al caso de los descubrimientos arqueológicos y su regulación por dicha Ley la define como *un desastroso intento de nuestro legislador para regular con detenimiento los hallazgos de interés arqueológico (...) la falta de claridad de ideas, las distinciones y soluciones injustificadas y, en general una técnica deplorable, caracteriza esta ley, que supuso además un retroceso respecto al sistema instaurado por el párrafo 3º del artículo 351 del Código Civil*<sup>2687</sup>. No obstante, sin duda alguna el balance de la aplicación de la ley de 1911 fue en muchos aspectos positivo, sin obviar los obstáculos administrativos y económicos que los avatares políticos de principio del siglo XX aquejaron la situación española. Sería interesante mostrar algunos ejemplos de la actuación que el Estado desempeño a partir de la promulgación de la ley, especialmente en el ámbito de la esfera de los particulares.

## **5.1. Una nueva concienciación pública del Patrimonio Arqueológico.**

### **5.1.1. La pérdida del Patrimonio Arqueológico: una realidad social de la España de principio del siglo XX.**

Un gran número de expolios arqueológicos muy significativos en el territorio español llevaron a una mayor concienciación de la importancia que tenían los objetos arqueológicos para el conocimiento cultural de una sociedad y para la profundización de su pasado histórico. Hacia el año 1905 José Ramón Mélida, lamentaba en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos el estado en que se encontraba la ciudad de Itálica, y el empeño por protegerla por parte de algunos personajes ilustres, como fue en este caso Fernández López, Vocal Secretario de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Sevilla: *Desgraciadamente los hallazgos de las antigüedades en España son casuales, y las más de las veces la codicia y la ignorancia, casi siempre unidas, rodeándoles de misterio o de punible secreto, imposibilita que la ciencia pueda registrarlos entres sus legítimas conquistas. Muy rara vez suelen las entidades oficiales llamadas a ello, o las personas competentes á quienes guían su afición, llegar a tiempo de salvar lo que se descubre y estudiarlo para aumentar el caudal de los conocimientos históricos. Por lo mismo debemos congratularnos del plausible celo de que han dado muestra la Comisión de Monumentos de Sevilla y su Secretario, D. Manuel Fernández López, con motivo del nuevo filón de antigüedades fortuitamente descubierto en Itálica al hacer en sus tierras unos desmontes la Compañía ferroviaria de las minas de Cala a San Juan de Aznalfarache (...) los hallazgos se iniciaron en la Vegueta de Santiponce, que los objetos hallados en un principio fueron ocultados y mal vendidos, y un importante trozo de vía romana que apareció en los desmontes no fue destruido por evitarlo a tiempo el alcalde de Santiponce Juan Antonio Romero. Vemos luego que este estado de cosa estimuló a la Comisión de Monumentos de Sevilla, la cual envió a examinar los hallazgos a los señores Gestoso y Fernández*

<sup>2687</sup> MOREU BALLONGA, José Luis, *Ocupación, hallazgo y tesoro*, Barcelona, Bosch, 1980, pp.656-658.

*López, quienes indicaron la conveniencia de practicar excavaciones, lo que vino a facilitar la Diputación Provincial, proporcionando los medios pecuarios; hecho que por ser raro en España merece ser aquí consignado y aplaudido, y merece ser recompensado por quien pueda hacerlo*<sup>2688</sup>.

El propio Manuel Fernández López, narra las vicisitudes que tuvo que pasar junto con José Gestoso, para evitar la pérdida de los bienes arqueológicos: *Para salvar la hondonada que presenta el terreno en la llamada Vegueta de Santiponce y evitar el peligro de las riadas, allí tan frecuentes en años lluviosos, la compañía ferroviaria de las Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache decidió construir un alto terraplén, cortado a trechos por alcantarillas puentes. Cuando en la primavera última comenzaron las obras todo parecía fácil y sencillo, aunque pronto surgió una dificultad que amenazaba dar al traste con el proyecto (...) La Compañía no disponía de la tierra necesaria para el relleno del terraplén y los propietarios colindantes a quienes quiso comprarla o se resistían a vender o pedían por ella crecidos precios (...) Como era de esperar, apenas iniciado el desmonte de la pequeña loma formados por los sedimentos del río entre la nueva vía y la ribera de Guillena, comenzaron a salir antiguallas de las que tan pródigo se muestra el suelo de la vieja Itálica tan luego se le araña la corteza. En pocos días encontraron los trabajadores un fuste de columna aserrado en dos trozos y de tres metros escasos de longitud total (...) La noticia de estos descubrimientos súpolo el vicepresidente de la comisión de monumentos históricos y artísticos por los guardas encargados de las ruinas y acto seguido dispuso que dos individuos de la Comisión, el Excmo. Sr. Don José Gestoso y el que estas líneas escribe, fueron a comprobarla sobre el terreno (...) Estando en el anfiteatro supimos que el capataz ó destagista de la vía férrea había encontrado una lápida grande de mármol, con inscripción, que guardaba en su casa. Inmediatamente tratamos de comprobar la noticia y para ello nos presentamos en el domicilio del tal. La mujer que salió a recibirnos y a la que expusimos nuestra pretensión, porque el capataz se encontraba en el trabajador, nos contestó que nada sabía de la dicha lápida, pues la que ella conocía y podía mostrarnos ninguna tenía letras. Aceptado el ofrecimiento de ver las que tuviera nos introdujo en el corral, en donde, amontonadas en un rincón había, en efecto, seis u ocho, de diferentes tamaños (...) En nuestro deseo de hablar con el capataz esperamos su regreso un buen rato; pero convencido de que no volvería hasta ya entrada la noche, según nos repitió la mujer, dímonos por vencidos, salimos de la casa y tomamos el camino de Sevilla. Por temperamento somos y hemos sido siempre opuesto a creer que nadie nos engañe; pero en la ocasión presente se nos figura que aquella mujer se burló de nosotros. Decimos esto (...) porque sabemos de ciencia cierta que poseía la lápida, traída más tarde a las oficinas que la empresa ferroviaria de Cala a San Juan de Aznalfarache tiene establecidas en la calle Reyes Católicos de esta ciudad, en donde las hemos vistos y copiado. En pueblos demasiados pequeños es imposible que ciertos negocios queden ignorados, máxime cuando en ellos se atraviesan cantidades de relativa importancia. Tal apareció con el hallazgo de una plancha de bronce (...) La plancha, encontrada en la Vegueta y transportada de noche al pueblo (...) que enterados del descubrimiento dos señores de Sevilla, mercaderes de antigüedades, acudieron a*

---

<sup>2688</sup> MELIDA, José Ramón, "Excavaciones en Itálica" *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año IX, Febrero de 1905, N.2, pp.89-92, pp.283-284.

*Santiponce al amanecer de un día de junio, la vieron y la examinaron con todo despacio y lleváronse un calco o copia de la inscripción, probablemente para consultar con peritos el valor e importancia del objeto y hasta dónde podrían alargarse en la oferta; que días después volvieron al pueblo, precisamente en las horas de mayor calor, y en ciertos establecimientos pusieron al habla con los descubridores y cerraron el trato en la cantidad de 2.500 pesetas, pagadas en billetes del Banco de España<sup>2689</sup>.*

### **5.1.2. La génesis de la Arqueología científica española.**

A finales del siglo XIX existía un panorama desalentador en el ámbito de la arqueología, ya que su docencia todavía se seguía impartiendo en la ya anticuada Escuela Superior de Diplomática, los trabajos arqueológicos estaban controlados por la Academia de la Historia y a su vez se sucedían las protestas contra la exportación de objetos arqueológicos al extranjero. Sin embargo, la situación cambia a principio del siglo XX, buscándose un mayor acercamiento a las corrientes europeas del momento, comenzando la colaboración de arqueólogos españoles en proyectos internacionales. Sin entrar en profundidad en la trayectoria que tuvo la arqueología española<sup>2690</sup> en estos años de principios de siglo, cabe mencionar tres hitos importantes que ayudaron a su desarrollo, y que indudablemente abrieron el camino para la germinación de una ley de arqueología. La concienciación específica del Patrimonio Arqueológico en el ámbito español a principio del siglo XX va a estar marcado por dos factores fundamentales:

- La verdadera génesis del arqueólogo frente al perfil del anticuario.
- La definitiva delimitación entre los objetos arqueológicos y los objetos artísticos, por lo que se separaba la figura del arqueólogo y el historiador del arte definitivamente.
- La institucionalización académica de la arqueología.
- *El arqueólogo frente al anticuario.*

Surge el perfil del arqueólogo como científico, frente a la visión que se tenía durante el siglo XIX como literato o como anticuario, debido a la ausencia de una profesionalización real de la arqueología hasta bien avanzado el siglo XIX. El término arqueólogo era un epíteto complementario del historiador, literato o poeta, o incluso se identificaba como tal aquella persona que se ocupaba de la descripción de monumentos, generalmente medievales, dentro de una obra histórica. Así los primeros directores del Museo Arqueológico Nacional, fundado en 1867, eran académicos de lengua o ilustres

<sup>2689</sup> FERNANDEZ LOPEZ, Manuel *Excavaciones en Itálica*, Sevilla, 1904, Est. Tip. Saucedá.

<sup>2690</sup> GOBERNA, M<sup>a</sup> Victoria “Los estudios de Prehistoria durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX”. *La obra de Luis Siret* en OLMEDO, Fernando (Coord.), Homenaje a Luis Siret. junio, 1984, p.31.



literatos<sup>2691</sup>. Al mismo tiempo el anticuario aparecía como una figura específica tanto en su objeto de estudios como preparación científica<sup>2692</sup>. Todavía en 1899 el Real Academia de la Historia definía el cargo de anticuario como un erudito de gabinete al más puro estilo ilustrado: *El anticuario es el conservador del Gabinete de Antigüedades y tendrá bajo su responsabilidad todas las llaves... cuidará de colocar los objetos en sus respectivas series, explicando sus leyendas, inscripciones y tipos (...) informando de las adquisiciones de medallas o antigüedades por compra, donativo u otro medio*. Con el ya señalado Decreto del 4 de octubre de 1900, se cerraría la era de los anticuarios, que sería reemplazada por el cuerpo de los arqueólogos, por lo que la nueva generación de excavadores se escaparía de la tutela de las instituciones oficiales. Un caso paradigmático sería la incorporación de José Mélida en la cátedra de arqueología, sustituyendo a un anticuario de la generación anterior, Juan Catalina García López.

**- La delimitación entre los bienes artísticos y bienes arqueológicos. La separación entre la Arqueología y la Historia del arte.**

Durante todo el siglo XIX tanto en los corpus normativos como en algunos textos de contenidos científicos no quedaba claro en muchas ocasiones la distinción entre ambos tipos de bienes, probablemente porque no se había delimitado aun el contenido disciplinar de la Arqueología<sup>2693</sup>. La delimitación objetiva de la Arqueología y la Historia del Arte, que se va separando de otras actividades propias de otras disciplinas de las ciencias sociales e incluso naturales, va a ir cuajando a lo largo del siglo. La arqueología durante la etapa decimonónica se había considerado como la ciencia que estudiaba las obras de arte y de la industria bajo el exclusivo aspecto de la antigüedad, de ahí la denominación que se da de las antigüedades. Como afirma Margarita Díaz-Andreu *la importancia en el análisis del pasado de los restos monumentales y de los objetos de cierto valor estético hizo que fueran la Academia de San Fernando junto con los de la Historia la que organiza el estudio de lo antiguo. Todavía en la segunda mitad del siglo se define a la arqueología como la ciencia de los objetos antiguos, lo que hace que las excavaciones arqueológicas sean muy escasas, todavía se propongan dataciones inadecuadas para los nuevos objetos y que tengan una mayor publicidad los que se consideran como un valor artístico*. En este ambiente podemos destacar como obras de reconocido valor arqueológico en la actualidad, en aquel momento se le estaba dando todavía una valoración artística, como se pueda ejemplificar con la reacción que hace Pierre Paris ante

---

<sup>2691</sup> OLMOS, Ricardo "Lecturas del arte antiguo en la literatura española del siglo XIX" en *Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*, Madrid, 1995, pp.173-175.

<sup>2692</sup> PASAMAR ALZURIA, G.; PEIRÓ MARTÍN, I. "Los orígenes de la profesionalización historiográfica española sobre la Prehistoria y la Antigüedad (tradiciones decimonónicas y tradiciones europeas)" en OLMOS R (Coord.) *Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua en España (siglos XVIII-XX)*, Congreso Internacional, Madrid, 13-16 de diciembre, 1988. Madrid, pp.73-78.

<sup>2693</sup> BERLANGA PALOMO, M<sup>a</sup> J. "Algunas referencias sobre el concepto de Arqueología en España en el siglo XIX" en *Gerión*, Vol.21, N.1, 2003, pp.379-394.

la Dama de Elche, quien le da primordialmente un tratamiento estético más que arqueológico. Todavía a finales del siglo XIX, en 1885, el historiador J.R. Mélida señalaba en un artículo titulado *De la Arqueología que Todavía hay confusión entre la Arqueología y la Historia del Arte, error que no solo existe en España, sino también en el extranjero, por lo cual son frecuentes tratados de Historia del arte que lo so de Arqueología y viceversa*<sup>2694</sup>.

En 1866, la revista fundada por J.M<sup>a</sup>. Tubino, la *Revista de Bellas Artes*, tenía el subtítulo de *Arqueología, Pintura, Música, Escultura y Arquitectura*, pasando a denominarse en el número 52 *Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica*. Todavía en 1925 se fundaría otra revista científica con ambas denominaciones: la *Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica*, que se desdoblaría en 1940<sup>2695</sup>. Díaz-Andreu realizó un interesante estudio del desdoble de ambas disciplinas, que lo achaca principalmente a que los objetos y métodos de estudios dejan de ser los mismos, así como en el siglo XX el valor artístico de los objetos arqueológicos dejaría de ser el único de los que conllevaba, dando también importante otros aspectos como el contexto arqueológico<sup>2696</sup>. En la Escuela de Diplomática había una asignatura que se llamaba *Arqueología e Historia general del Arte, con nociones de organización y régimen de los Museos de Arqueología y Bellas Artes*, donde en cierta manera ya se delimitaba ambos conocimientos. Sería ya a partir de 1920 cuando se produce el cima definitivo entre la Historia del Arte y la Arqueología, que hay que encontrarlos en dos factores primordiales: uno de tipo técnico, el hecho de que progresivamente se fueron introduciendo labores de campo como herramienta fundamental del trabajo arqueológico, y que en los años veinte se populariza con el método Wheeler, y en segundo lugar, la adopción de una metodología aparecida en la antropología, el método histórico-cultural, por lo que *convierte el objeto de análisis el estudio exhaustivo del objeto en sí y su relación con otros, tomando una importancia principal su localización geográfica. Como consecuencia el valor artístico se convierte en un elemento más perdiendo así su importancia previa. Esta transformación comenzará a invadir terrenos previamente tratados desde un punto de vista artístico*. Es en la figura de Pere Bosch Gimpera (1891-1974), donde vamos a encontrar al primer arqueólogo que poco a poco se va a ir distanciando de la historia del arte, al dejar de ser el elemento artístico el eje principal de sus artículos, y más las cuestiones puramente arqueológicas, de ahí que en su libro publicado en 1929 para la Exposición Internacional de Barcelona titulado *El arte en España*,

<sup>2694</sup> MELIDA, J.R. *Del concepto de la Arqueología*, 10 de julio de 1885.

<sup>2695</sup> MORA, G. "La arqueología en las revistas de arte del siglo XIX", VII Jornadas de Arte. *Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*. Madrid, 22-25 de noviembre de 19914 (Madrid, 1995), pp.161-170.

<sup>2696</sup> DIAZ-ANDREU, M. "Arte y Arqueología: La larga historia de una separación", VII Jornadas de Arte. *Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*. Madrid, 22-25 de noviembre de 1994 (Madrid, 1995), pp.151-160.

incluiría objetos arqueológicos, que nunca anteriormente se hubieran considerados obras de artes, como la industria lítica, los arpones, etc.<sup>2697</sup>

***-La institucionalización pública de la arqueología científica a comienzo del siglo XX.***

Como réplica a las instituciones nacidas a finales del siglo XIX en el ámbito de la iniciativa privada, el Estado Liberal de principio del siglo XX iría a impulsar definitivamente a la llamada arqueología científica con una serie de instituciones administrativas de carácter investigador con el objeto de respaldar los estudios que se estaban iniciando en el campo científico. Como apunta *hasta este momento la investigación propiamente dicha carecía de una sólida dirección, descansando principalmente en individualidades, Sociedades Arqueológicas privadas o en instituciones extranjeras que encontraban en España, como en otros países sudeuropeos, un marco excelente de actuación científica y enviaban sus investigadores pensionados y con misiones muy concretas. Las instituciones relacionadas directamente o indirectamente con la Arqueología, esto es, las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando a través de las Comisiones Provinciales de Monumentos y el Museo Arqueológico Nacional no realizaban una labor puramente investigadora sino más bien proteccionista.* De esta manera nacerían al igual que hubiera ocurrido en otros países europeos, fueron surgiendo una amplia gama de instituciones académicas que prepararían el camino definitivo hacia la arqueología científica, y que por incitaría indudablemente al respaldo legislativo con la promulgación de la Ley de 1911 y el Reglamento de 1912.

La institucionalización académica va a suponer también un importante paso en el camino de la identidad de la arqueología como disciplina propia. El siglo XIX había supuesto el inicio de la compartimentación del saber en disciplinas diferentes, ya que la creciente importancia del Estado en el sistema político obligaba a especializar a los futuros gestores, por lo que llevó a generar nuevas escuelas, especialmente para que dirijan los recién creados Museos, por lo que siguiendo el modelo francés, sería las escuelas superiores las que se encargarían de impartir los nuevos corpus de conocimiento, ya que en la Facultad de Filosofía y Letras, creada en 1845, no se estudiaba ni arqueología ni arte. No sería hasta el **Real Decreto de 20 de julio de 1900**, cuando la arqueología se incorpora a la Universidad, al ser suprimido la Escuela Superior de Diplomática para incorporarse a la Facultad de Filosofía y Letras<sup>2698</sup>. Sin

---

<sup>2697</sup> DIAZ-ANDREU, M., 1995, pp.156-157.

<sup>2698</sup> Un interesante estudio sobre BERLANGA PALOMO, M<sup>a</sup> J. “La enseñanza de la Arqueología en el siglo XIX: de las Cátedras de Castellanos de Losada a la introducción en los estudios universitarios” en *Anales de Arqueología Cordobesa*, N°12, 2001, pp13-33. La figura de Castellano de Losada fue una de las personalidades más importantes del panorama arqueológico de mediados del siglo XIX, considerado como el verdadero introductor de los estudios arqueológicos en España, aunque no en ámbitos universitarios, por lo que nunca fue reconocido por la Academia de la Historia. Posteriormente en el Ateneo Científico de Madrid

embargo, no podemos más que resaltar la importancia que había desempeñado en el ámbito docente dicha Escuela en el ámbito de la arqueología<sup>2699</sup>. A raíz del **Real Decreto de 11 de enero de 1907** sería creado la Junta para la ampliación de Estudios, gracias a la iniciativa de Francisco Giner de los Ríos, que posteriormente sería reformado por el Real Decreto de 22 de enero de 1910 por el Ministro de Instrucción Pública del gobierno liberal, Antonio Barroso<sup>2700</sup>. La creación de la Junta nacería en el seno de personajes procedentes del entorno de la Institución Libre de Enseñanza, que en principio contaría con la oposición firmes de muchos sectores conservadores. Con la promulgación del **Real Decreto de 8 de marzo de 1910** firmado por el Conde de Romanones, como Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del gobierno liberal de José Canalejas, nacería el Centro de Estudios Históricos, estando al frente a Ramón Menéndez y Pidal, organizándose en secciones, creándose en 1910 la Sección Segunda de Arte y Arqueología, bajo la dirección de Manuel Gómez Moreno (1870-1970)<sup>2701</sup>. El Centro nacería bajo la iniciativa de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que había sido creada en 1907 bajo la dirección de Ramón y Cajal. Bajo la tutela del propio Gómez Moreno se formarían algunos de los importantes arqueólogos españoles como fueron Juan Cabré, o los andaluces Cayetano de Mergelina y Juan de Mata Carriazo. Del seno de la institución nacería la primera revista española con contenido arqueológico, el Archivo Español de Arte y Arqueología. El fin del Centro Histórico está recogido en la propia Exposición de Motivos del decreto, investigar los fundamentos de la identidad española a partir de estudios filológicos, artísticos, filosóficos, históricos y jurídicos. Entre las atribuciones que se darían a la nueva institución estarían las de investigar las fuentes, preparando la publicación de ediciones críticas de documentos inéditos o defectuosamente publicado (como crónicas, obras literarias, cartularios, fueros, etcétera), glosarios, monografías, obras filosóficas, históricas, literarias, filológicas, artísticas o arqueológicas (art.2.1°); organizar misiones científicas, excavaciones y exploraciones para el estudio de monumentos, documentos, dialectos, folklore, instituciones sociales, y, en general, cuanto pueda ser fuente del conocimiento científico (art.2.2°); de

---

se introdujo algunos conocimientos arqueológicos hasta que definitivamente se incorporaría a los planes de la Facultad de Filosofía y Letras en 1900.

<sup>2699</sup> ROMERO RECIO, Mirella “La arqueología en la enseñanza española durante el siglo XIX: nuevas aportaciones a la luz de documentos inéditos” en BELTRAN FORTES, José; CACCIOTI, Beatrice y PALMA VENETUCCI (Editores), *Arqueología, coleccionismo y antigüedad. España e Italia en el siglo XIX*. Universidad de Sevilla, 2006. pp. 581-601.

<sup>2700</sup> GOMEZ MENDOZA, Josefina La Junta para ampliación de Estudios y la Academia de Historia, Arqueología en GOMEZ MENDOZA, Josefina (ed.) *La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y los académicos de la Historia*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2008, p.13.

<sup>2701</sup> LOPEZ SANCHEZ, José M<sup>a</sup> El Centro de Estudios Históricos y los orígenes de un moderno sistema científico español, en PUIG-SAMPER (ed.), *Tiempos de Investigación, JAE-CSIC, Cien años de ciencia en España*, Madrid, 2007, pp.121-127; ESPADA BURGOS, M. *La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Un Guadiana junto al Tiber*. Madrid, 2000.

iniciar en los métodos de investigación a un corto número de alumnos, haciendo que éstos tomen parte, cuando sea posible, en las tareas ante enumeradas (art.2.3º); de formar una Biblioteca para los estudios históricos, y establecer relaciones y cambios con análogos Centros científicos extranjeros (art.2.5º). Las producciones del Centro se entregarán a la Junta, la cual tendrá la propiedad de las ediciones que haga (art.3º). Se establecería un peculiar procedimiento administrativo por el que la Junta elevaría al Ministro el proyecto de trabajo y que durante el año puedan hacerse y la propuesta de fondos que para su realización considere necesarios, por lo que una vez aprobado la propuesta por el Ministro, se libraría a la Junta las cantidades concedidas, las cuales no podrán invertirse sino dentro de los límites fijados en la disposición ministerial, y deberán ser justificadas en la forma ordinaria (art.6º). A su vez, la Junta daría cuenta al Ministerio todos los años de los trabajos realizados en el Centro y de los resultados obtenidos (art.7º).

Vinculada al Centro de Estudios Históricos, se creó a raíz del **Real Decreto de 3 de junio de 1910** la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma para estudios de arqueología e historia (art.1). El fomento de los estudios históricos y arqueológicos fundamentaría su propia fundación como así aparecía en la Exposición de Motivos, y además con ello se pretendía cumplir con uno de los aspectos más trascendentales en el ámbito de la renovación arqueológica, enviar pensionados al extranjero para formarse en las universidades europeas, con *el fin de estudiar en los archivos, bibliotecas y monumentos las fuentes de nuestra historia patria, nuestras relaciones con Italia y el desarrollo de nuestro arte y nuestra ciencia en las antiguas provincias italianas*. Entre los fines de la Escuela de Roma estarían: Proporcionar a sus miembros, medios para las investigaciones arqueológicas e históricas (art.2.1); Estudiar en los Archivos, Bibliotecas y Monumentos las fuentes la historia patria, las relaciones con Italia y el desarrollo del arte español, preparando la publicación de colecciones de documentos, obras y monografías (art.2.2); Tomar parte en las exploraciones arqueológicas que se verificasen en Italia, y hacer excursiones con el mismo objeto a las costas mediterráneas (art.2.3); Comunicarse con los Centros análogos que otros países tienen en Roma, y con las Academias y Sociedades italianas de Arqueología e historia (art.2.4) y servir de Centro a los españoles que trabajen en cuestiones similares en Italia y auxiliar a las Corporaciones y particulares que se dediquen a estos estudios en España (art.2.5). Esta institución estará gestionada desde el 21 de diciembre de 1910 por Ramón Menéndez Pidal como director y Joan Pijoan como secretario. La celebración de la Exposición Internacional de Roma en 1911, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la proclamación del Reino de Italia, se convertiría en un nuevo hito importante en la institucionalización arqueológica española, ya que desde el Centro de Estudios Históricos se organizaría la participación hispana, en la que se mostraría a los países participantes la



riqueza arqueológica del país<sup>2702</sup>. Pronto se vería obligada a suspender sus actividades en 1914 con el inicio de la I Guerra Mundial.

Por la **Real Orden de 28 de mayo de 1912** nacería la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, agregada al Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales dependiente, a su vez de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que estaría presidida por el Marqués de Cerralbo. En la Exposición de Motivos se daría los primeros pasos para la concienciación administrativa de la existencia de un rico patrimonio paleontológico en España, a la vez que arqueológico: *Desde hace tiempo viene efectuándose en España, si bien de una manera irregular, estudios en las simas, cavernas y abrigos naturales, no habiéndose obtenido en las exploraciones efectuadas los resultados que pudieran esperarse, por causa de los dispendios que tales trabajos exigen. Merecen, por tanto, que el Estado les preste el debido apoyo, tanto más cuanto son abundantísimas en el territorio español las cavidades naturales a causa de la especial estructura geológica de la Península Ibérica. Son estas investigaciones en algún caso de índole puramente geológicas; tienen por objeto otras el estudio de la, por muchos conceptos interesante, fauna cavernícola; caen de lleno en el campo de la paleontología las encaminadas al conocimiento de la fauna espeleológica extinguida, revistiendo excepcional interés las exploraciones de cavernas y abrigos que sirvieron de habitación al hombre primitivo, cuyo estudio ha producido importantes descubrimientos en la Ciencia Prehistórica y ha suministrado valiosos datos para el conocimiento de la historia patria. El interés que en nuestro país tienen esas investigaciones ha sido universalmente reconocido, como lo prueban las intensas exploraciones que en las más célebres cavernas del territorio cantábrico se están haciendo por especialistas extranjeros ... Se crea una Comisión de Exploraciones Espeleológicas cuyos fines serán la exploración y el estudio de las simas, cavernas y abrigos naturales (...).* Posteriormente, a raíz de **la Real Orden de 26 de mayo de 1913** se dispuso que esta Comisión se denominase de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas<sup>2703</sup>. En 1925 sería fundada la revista el Archivo Español de Arte y Arqueología, codirigido por Manuel Gómez Moreno y Elías Tormo. A este panorama institucional habría que citar el Instituto Francés de Madrid, antecedente de la Casa de Velázquez, que presidido por P.París se fundó en 1913 a partir de L'Ecole D'Hautes Etudes Hispaniques de la Universidad de Burdeos de 1909.

#### **- La presencia de arqueólogos extranjeros en España.**

La presencia de arqueólogos e historiadores extranjeros procedentes de universidades en su mayoría en España a fines del siglo XIX y comienzo del

<sup>2702</sup> SALAS ALVAREZ, Jesús; SANCHEZ-GIL DEL MONTES, Jacinto “La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y la presencia española en la Exposición Internacional de Roma de 1911”, *Zona Arqueológica*, N°3, 2004, pp.401-406.

<sup>2703</sup> RASILLA VIVES, Marcos de “La Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas y la Arqueología Prehistórica en España (1913-1935)” en MORA, Gloria; DIAZ-ANDREU, Margarita *La cristalización del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*. Málaga, 1997, pp.431-437.

siglo XX va a marcar una nueva etapa en la investigación arqueológica en nuestro país, dinamizará asimismo el panorama peninsular<sup>2704</sup>. Las aportaciones de la arqueología francesa a la española en los primeros decenios del siglo XX analizadas por P. Rouillard, fueron en estos años trascendental para el desarrollo de la arqueología nacional<sup>2705</sup>. Dos personas sobresalen en la investigación de la arqueología de España en este periodo de encrucijadas de siglos, Arthur Engel y Pierre Paris, habiendo realizado su primer viaje en la década de 1880-1890. La trayectoria de Engels en España comienza a raíz de un viaje a Andalucía en 1886, y al mismo tiempo le lleva a Elche, especialmente con la misión que había sido confiada por el Ministerio de Instrucción Pública de Francia, por lo que tiene la oportunidad de conocer las colecciones hispanas del Cerro de los Santos, que serían adquiridas por el Louvre, depositadas en el Departamento de Antigüedades Orientales. Junto a Engels, Pierre París recorre España de un lugar a otro, que comienza su primer viaje en 1895, punto de partida de una amplia actividad arqueológica que le supone el descubrimiento de la Dama de Elche, que le llevará a intensificar sus investigaciones sobre el mundo ibérico, que le llevará a Andalucía, siendo las excavaciones en Osuna sus más importantes excavaciones, que serían realizadas entre 1903 y 1906, cuyos principales bienes arqueológicos descubiertos serían adquiridos por el Museo del Louvre. Como así puntualiza Pierre Rouillard el Louvre se convierte en un verdadero centro de adquisición de piezas del arte ibérico, pero aunque el museo francés será pionero en este hecho, la adquisición también se convierte en imprevista, puesto que ningún departamento estaba especialmente preparado para recibir objetos prerromanos de España, hallándose una solución, al ser guardados en el Departamento de Antigüedades Orientales, por lo que en el espacio de quince años, el Louvre adquiere piezas encontradas a lo largo de excavaciones protagonizada por los franceses, o abastecidas por sus propietarios españoles, como Ibarra, Sanadr o Barón, constituyendo en esta época, el único conjunto de arte ibérico conservado fuera de España. A raíz de estas adquisiciones, se intentó por parte de Pierre París institucionalizar los intercambios científicos hispano-franceses, que no llegaría hasta la creación de L'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques, multiplicándose los intercambios, que participaría el mismo Mélida, entonces director del Museo de las Antigüedades Nacionales en Madrid, por lo que se multiplicarían los informes científicos arqueológicos en las revistas francesas, como la *Revue Archologique*, el *Bulletin Hispaniae* y l'*Antropologie*, por lo que el hispanismo se pone de moda en la investigación arqueológica del mundo

---

<sup>2704</sup> BELTRAN FORTES, José “La arqueología en España durante la primera mitad del siglo XX. Apuntes sobre el marco institucional” en BELTRAN FORTES, José; HABIBI Mohammed, *Historia de la arqueología en el Norte de Marruecos durante el periodo del protectorado y sus referentes en España*, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2008, pp.20-23.

<sup>2705</sup> ROUILLARD, P. “La aportación de los arqueólogos franceses a la Arqueología española” en *Historiografía de la Arqueología Española. Las Instituciones*. Madrid, 2002, Museo de San Isidro, pp.143-163.

galo<sup>2706</sup>. Los arqueólogos alemanes también tuvieron una amplia representatividad simbolizada especialmente en la figura de Adof Shulten, que se centraría sus investigadores en Numancia y posteriormente en Tartessos<sup>2707</sup>, y en menor medida los ingleses, representado por Jorge Bonsor, que terminaría residiendo definitivamente en España y el belga Luis Siret, que se centró en las excavaciones de las culturas de los Millares y El Argar.

Otro de los grandes problemas que seguiría siendo frecuente sería la financiación de las propias excavaciones arqueológicas, que en muchos casos se entremezclaba el apoyo público y privado. Cabe mencionar como ilustración de ello el relato de Eduardo González Hurtebise al descubrir una antigua necrópolis en San Feliu de Guixols: *En octubre de 1903 trabajaba la brigada municipal en la cantera llamada del Fortín (...) Al explotar un barreno cayeron desde la altura, con la piedra descuajada, abundantes fragmentos de cerámica y un as amporitano con leyenda latina, que recogió uno de los obreros. Este, con la esperanza de encontrar monedas de más valor, reconoció el lugar, hallando que en el corte vertical se acusaba perfectamente la forma de un silo; lo vació de la tierra que contenía y encontró dos ánforas de barro (...) Este obrero mostró el as á D. Ramón Vila, entonces síndico y después Presidente de aquel Ayuntamiento, a quien se lo cedió más tarde. Al poco tiempo pasé a San Feliu de Gixols (...) no tardando en serme comunicado lo ocurrido. Vi el as en cuestión y enseguida visité el sitio del descubrimiento adquiriendo la certeza de que (...) estábamos, pues, frente a una Necrópolis antigua, que a todo trance era necesario explorar (...). Verificado el descubrimiento el Ayuntamiento, atendiendo mi ruego, costeó el primer tanteo de exploración. Habiendo dado satisfactorio resultado, fue menester abrir una suscripción para sufragar los gastos, lo que en pocos días se cubrió con donativos de S.M. el Rey D. Alfonso XIII, de la Diputación Provincial de Gerona, del Gobernador Civil de la Provincia y de numerosos particulares (...)*<sup>2708</sup>.

## 5.2. El proceso de configuración de la ley arqueológica.

### 5.2.1. La necesidad de una ley.

En la Memoria de la Real Academia de la Historia de 1911 se recogía el celo puesto en la protección de las antigüedades y su colaboración con la Real Academia de San Fernando de Madrid, así como se instaba a la necesidad de promulgar una ley debido a los continuos expolios que se estaban produciendo en todo el país: (...) *Ha proseguido con laudabilísimo celo la meritoria misión que ejerce en fraternal unión con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de*

<sup>2706</sup> ROUILLARD, Pierre *Los arqueólogos franceses y la arqueología española alrededor de 1900*, Historiografía de la arqueología española, Las instituciones, Madrid, Museo de San Isidro, 2002, pp.143-161.

<sup>2707</sup> BLECH, Michel *Las aportaciones de los arqueólogos alemanes a la arqueología española*, en *Historiografía de la arqueología española*, Las instituciones, Madrid, Museo de San Isidro, 2002, pp.83-117.

<sup>2708</sup> GONZÁLEZ HURTEBISE, Eduardo "Descubrimiento de una antigua necrópolis en San Feliu de Gixols", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tercera Epoca, Año IX, julio a diciembre de 1905, pp.218-220.

*cuidar de la conservación de los monumentos nacionales de mayor importancia desde el punto de vista histórico y artístico. Conforme a esto ha emitido dictamen favorable para la declaración de monumentos nacionales de las iglesias de Santa María Magdalena, de Zamora, y de Santa Catalina y San José, de Sevilla. Acordó la Academia, interesar del Gobierno que recabe de las Diputaciones Provinciales eficaz protección para las Comisiones de Monumentos históricos y artísticos, cuyo estado de penuria suele malograr muchas de sus iniciativas(...).El Señor Marqués de Cerralbo enteró cumplidamente a la Academia del Proyecto de Ley presentado por el Ministro de Instrucción Pública en el Senado para regularizar las excavaciones de ruinas arqueológicas, que procuró mejorar con enmiendas importantes, aceptadas por el Ministro. Le felicitó la Academia, acordándose constara en alta la satisfacción de ésta por el celo y diligencia desplegados en este asunto(...).Con el unánime ascenso de la Academia se acordó dirigir una moción al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes exponiendo que, en vista de los frecuentes casos de enajenaciones de objetos de gran valor histórico y artísticos por diversas entidades y corporaciones, se cree nuestra Corporación obligada a llamar la atención al Gobierno para que se evite la pérdida de la riqueza artística nacional y para que cuanto antes se promulgue una ley que tienda a evitar la exportación de aquel género de objetos<sup>2709</sup>. La propia Real Academia de la Historia remitiría varios oficios solicitando la atención del Gobierno para que fuese promulgada una ley de antigüedades, como la enviada el 20 de marzo de 1911 a raíz de la venta fraudulenta que se hizo de una arqueta de la Catedral de Zamora, como la del 20 de marzo de 1911: En vista de los frecuentes casos que ocurren de enajenaciones de objetos de gran valor histórico y artísticos realizadas por diversas entidades y corporaciones, de la que es patente ejemplo la reciente venta de la arqueta de la Catedral de Zamora, afortunadamente recuperada antes de su desaparición de nuestro territorio, esta Real Academia se cree en el deber de llamar respetuosamente la atención del Gobierno de S.M. para que se evite la pérdida de nuestra riqueza artística y arqueológica nacional y para que cuanto antes se promulgue una ley que tienda a evitar la exportación de aquel género de objetos (...). En la sesión del Senado del 19 de julio de 1910 se seguiría insistiendo en la necesidad de promulgar una ley sobre la exportación de obras de arte, el propio Ministro de Instrucción Pública achacaría no solamente a la escasez del presupuesto sino a la convicción de una identidad del bien que no fuera simplemente material, sino que se identificara con los intereses generales: En cuanto a la extracción de obras de arte (...) evidentemente había una dificultad notoria, y es la indotación de nuestro presupuesto para estas materias y la necesidad de que se llegue a un convencimiento, a una convicción, a una conciencia nacional acerca del valor, no sólo material, sino espiritual de nuestros tesoros artísticos<sup>2710</sup>.*

**5.2.2. El proyecto de ley de 2 de junio de 1911 presentado en el Senado por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Amalio Gimeno, estableciendo las reglas a que han de someterse las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de las ruinas y antigüedades.**

---

<sup>2709</sup> Boletín de la Real Academia de la Historia, *Documentos oficiales*, Tomo LX. Cuaderno IV, abril, 1912. pp.178-179.

<sup>2710</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.29, Sesión del 19 de julio de 1910, p.391.

Por fin, se promulgaría el **Real Decreto de 2 de junio de 1911** por el que se autorizaba al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a presentar a las Cortes un proyecto de ley estableciéndose las reglas que debían someterse las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de las ruinas y antigüedades. El proyecto de Ley sería presentado en el Senado por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Amalio Gimeno, constando de una densa Exposición de Motivos y 11 artículos. La definición de la categoría jurídica de excavación en su artículo 1º recogía ya las nuevas connotaciones de la arqueología científica, entendiendo por éstas *como las renovaciones deliberadas y metódicas de terrenos respecto a los cuales existan indicios de yacimientos arqueológicos, ya sean restos de construcciones, o ya antigüedades*, al mismo tiempo que categorizaba el concepto de antigüedades considerando como tales *las obras de arte y productos industriales pertenecientes a las edades prehistóricas, antigua y media que conserven señales ostensibles de haber permanecido bajo tierra y no se posea respecto de ellas noticias de haberse transmitido en uso continuo*, recogiendo de esta manera la tradición jurídica de nuestro país, aunque incorporaba como novedad los vestigios y restos paleontológicos, e incluso bienes inmuebles entre los que se incluían *las ruinas de edificios antiguos que se descubran; a las hoy existentes que entrañen importancia arqueológica y a los edificios de interés artístico abandonados a los estragos del tiempo, sea cualquiera su dueño y el uso a que estuvieran destinados*. Se procedería a la formación de un inventario por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de las ruinas monumentales, a los que se unirían *las antigüedades utilizadas en edificaciones modernas, prohibiéndose en absoluto sus deterioros intencionados, así como sus reformas, las cuales solo podrán efectuarse previo dictamen de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando* (art.3.1), obligando al Estado a conservar dichas ruinas, declarándolas exentas de la contribución territorial (art.3.2). Se incorporaba el derecho de realizar excavaciones por parte del Estado en dominio privado, bien adquiriendo por expediente de utilidad pública, bien indemnizando al propietario de los daños y perjuicios que la excavación ocasionase en su finca, según tasación legal (art.4.1), así como el derecho de propiedad que el Estado, mediante expediente de utilidad pública y previa la correspondiente indemnización (art.4.2). De igual modo se incorporaría a dominio público, todas las antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo o encontradas al demoler antiguos edificios (art.5.1), por lo que el descubridor recibiría como indemnización la mitad del importe de la tasación legal de los objetos encontrados, correspondiendo la otra mitad en el segundo caso al dueño del terreno (art.5.2). El mismo tratamiento correspondería a aquellas antigüedades de dominio privado que no fueran inventariadas en un plazo de cinco años, después de promulgada la ley (art.5.3). Se incorporaría al mismo tiempo las concesiones públicas de excavaciones arqueológicas, tanto a las Corporaciones oficiales, a los descubridores españoles y a los extranjeros. Con respecto a los



primeros, se obligaba a exponer al público los objetos hallados, puntualizando que debería de ser tal exposición decorosamente, por lo que en caso contrario pasarían al dominio y posesión del Estado (art.7). En cuanto a los particulares y las Sociedades Científicas españolas y extranjeras podrían obtener autorización para practicar excavaciones en terrenos de particulares, bajo la inspección del Estado, que podría anular la concesión si los trabajos no fuesen practicado de un modo científico (art.7), por lo que se estaba juricializando el carácter científico de las excavaciones.

Art.8º El Estado concede a los descubridores españoles autorizados por él la posesión de los objetos descubiertos en excavaciones mediante un cánón de tributación o conciertos especiales sobre la base de renunciar en todo o en parte a los beneficios de la concesión aludida. Esta posesión caducará a la muerte del descubridor o llegada la disolución de la Sociedad descubridora.

Los descubridores extranjeros autorizados por el Estado harán suyos en pleno dominio un ejemplar de todos los objetos duplicados que descubran, y tendrán, durante cinco años, el derecho exclusivo de reproducir por procedimientos que no menoscaben la conservación de los hallazgos cuantos objetos encuentren en sus investigaciones.

Art.9º Los actuales poseedores de las antigüedades conservarán su derecho de propiedad a las mismas, sin otras restricciones que las de inventariarlas y satisfacer un impuesto en caso de exportación, reservándose siempre el Estado los derecho de tanteo y retracto en las ventas que aquellos pudieran otorgar, debiendo ejercitarse el de tanteo en la forma y modo establecidos en el artículo 1637 del Código Civil, y el de retracto dentro de los veinte días útiles siguientes a la venta. Este término se contará desde el día en que se hubiere tenido noticia por cualquier modo fehaciente en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de haberse verificado la venta.

Art.10. Están sujetos a responsabilidad criminal, indemnización y pérdida de las antigüedades descubiertas, según los casos, los exploradores no autorizados y los que oculten, deterioren o destruyan ruinas o antigüedades.

Art.11. Por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se publicará, dentro del término de tres meses después de promulgada esta ley, el reglamento para su aplicación.

### **5.2.3. Las enmiendas al proyecto de Ley presentado por el Marqués de Cerralbo y Cortazar.**

La Comisión del Senado estaría formado por los senadores Amós Salvador, Presidente y los Vocales Carlos Alvarez Guijarro, Angel Aviles, El Duque de San Pedro y Cristino Martos, siendo el secretario José M. Herrero. El 17 de junio de 1911 se produce el debate en el Senado sobre el proyecto de ley de excavaciones arqueológicas que había presentado Antonio Gimeno. Muy interesante son las enmiendas presentadas por el Marqués de Cerralbo el 13 de junio de 1911 referente a los artículos 3º, 7º y 8º. Con referencia al artículo 3º

plantearía que la formación del inventario se encomendaría a un personal facultativo, ya de la Academia, ya del Cuerpo de Archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, ya de las Universidades, por catedráticos de las asignaturas que tuviera relación con las exploraciones. La enmienda del artículo 7º era puramente temporal, al referirse que al terminar el primer periodo debería añadirse: *Comprometiéndose éste a cumplir en el plazo de un año esas condiciones que notó en falta y por las que se constituye en propietario*. Una nueva enmienda al artículo 7º sería presentada por el propio Cerralbo, en la que incluía cual debía de ser la identidad profesional de los delegados inspectores, que según su parecer debían *pertenecer a las Academias oficiales antes mencionadas, o serán individuos del Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, o jefes de los Museos oficiales, o catedráticos de las Universidades y Cuerpos docentes, de las asignaturas que tienen relación con las exploraciones artísticas y arqueológicas, históricas o paleontológicas; y no se podrá anular una concesión, sino por un Tribunal constituido por cinco jueces designados por las entidades que se mencionan en este artículo y con audiencia del interesado*. A continuación presentaría una enmienda en el párrafo 2º del artículo 8º en la que añadiría que *Los objetos no duplicados podrá llevarlos al extranjero el descubridor, para su estudio, comparaciones y clasificación, comprometiéndose a devolverlos al Estado español en el plazo de un año*.

Unidos a las enmiendas de los artículos, el Marqués de Cerralbo presentaría como enmienda al proyecto de Ley un artículo adicional, defendiendo la necesidad de abrir en la Sección correspondiente del Ministerio un libro-registro, en el que, a petición de los exploradores que lo solicitasen, se consignarían los yacimientos, novedades artísticas, arqueológicas e históricas que descubrieran, para que conste y pueda demostrarse su original y primordial hallazgo, entregándose al solicitante certificado de la inscripción, lo que conllevaba la defensa del descubridores para que se hiciera constar en que condiciones se habían encontrados tales bienes. Una segunda proposición en forma de artículo adicional al Proyecto de Ley delimitaría la obligación del Estado de donar un ejemplar de cada objeto duplicado de los bienes adquiridos a aquellos Museos de provincia o locales que les correspondiera. Finalmente, propondría en un artículo adicional que el Ministro de Instrucción Pública les proporcionará mayor amplitud en sus salones y dependencias, así como consignaría en el presupuesto muy superiores cantidades, tanto para las instalaciones, cuanto para explorar y adquirir objetos, ruinas y yacimientos, que constituyeran el tesoro artístico y arqueológico de España. La defensa del Patrimonio Paleontológico vendría dada por el Senador Cortaza que propondría como añadido del artículo primero que quedaran sometidas a los *preceptos de esta ley las excavaciones que se hicieren en busca de restos paleontológicos, siempre que en ellas se descubrieren objetos correspondientes a la arqueología*. En el artículo 2º propondría asimismo suprimir la oración que

dijera: *Quedan también comprendidos en los preceptos de esta ley los vestigios y restos paleontológicos.*

#### **5.2.4. El debate parlamentario en torno a la aprobación de la ley de antigüedades: el conflicto institucional entre el derecho absoluto de la propiedad de los bienes arqueológicos y los intereses generales.**

El debate comenzaría en el Senado el 17 de junio de 1911 con la intervención del Conde de Casa-Valencia felicitando al Gobierno el dictamen *muy oportuno y acertado que ha dado para conservar todas aquellas antigüedades artísticas que tenemos en España. España e Italia son los dos países en que hay más antigüedades y monumentos artísticos, y es conveniente dictar las disposiciones oportunas para conservar esas obras.* El posterior discurso del Marqués de Cerralbo constituye una importante muestra de la realidad arqueológica en que se encontraba nuestro país en los primeros años del siglo XX. Comenzaría exaltando el alto valor que significaba las excavaciones arqueológicas para los intereses nacionales: *Las excavaciones, son de alta importancia en Naciones como la nuestra; las excavaciones prestan un servicio importantísimo, son fuente principalísima para la Historia (...) Tiene, pues, gran interés esta ley, por la protección extraordinaria que se concede a las excavaciones, que constituyen sin duda un elemento importantísimo para el desarrollo de conocimientos y progreso de la ciencia (...) La excavación es hoy una ciencia, de suma dificultad realizarla, técnicamente se entiende, y esta ley ayudará muchísimo a las excavaciones, imponiéndose como impone, pero efectivamente, la conservación de los monumentos y de los yacimientos (...)*<sup>2711</sup>. Al mismo tiempo apuntaba la necesidad de confeccionar un inventario de yacimientos, tarea que ya se había intentado en etapas anteriores, aunque frustrado el intento: *Se habla también en la ley, de hacer un inventario de todos los yacimientos, ruinas y antigüedades existentes en España; admirable disposición, porque este inventario que han intentado varias personas, entre ellas tan doctas como Fernández Guerra, Cean Bermúdez y hasta el mismo Cortes, se echaba mucho de menos, y era indispensable (...) porque esos inventarios no servirán solo para que el Sr. Ministro y que para que en el Ministerio se sepan el detalle y puntualización de todos los tesoros artísticos y arqueológicos de nuestra Patria, sino que deben servir para publicarse, y por consiguiente, para que los hombres de estudio y de ciencia puedan hallar en ellos elementos de que tan faltos nos encontramos, cuanto tantísimo trabajo cuesta una excavación científica (...). Para que el inventario no sea un mapa de errores, es por lo que propongo en la enmienda, que los inspectores sean personas dedicadas a estos estudios*<sup>2712</sup>. Defendería a su vez que las excavaciones debían de ser autorizadas por su carácter científico y por no motivos políticos, que en muchos casos dependían para su autorización oficial: *Duéleme decirlo, pero los excavadores pueden verse en casos tristes y de inmenso disgusto para ellos, sobre todo para su misma dignidad científica. Los excavadores también somos políticos, y puede ocurrir al hacer una excavación, que después de algunos años se presente un terrible momento electoral, y un inspector oficial denuncie por sugerencias de la política que no se hacen las excavaciones*

---

<sup>2711</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 17 de junio de 1911, p.883.

<sup>2712</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 17 de junio de 1911, p.884.

*científicamente, y por tanto, quitar la concesión, y quitarle la concesión a un arqueólogo es desconsiderarle científicamente. Esto es de gran importancia, y por eso en mi enmienda había pedido que se formase un Tribunal, compuesto nada menos que de cinco personas que pertenezcan a Academias y a los Cuerpos facultativos que detallo, de gran competencia en estos trabajos todos ellos (...) Por todo lo que expuse he pedido que en la ley se añadiese y especificase por el modo científico adecuado para hacer estas excavaciones (...). Alabaría la labor de los arqueólogos extranjeros en el territorio español, que debía de ser incluido su inclusión en el proyecto de Ley: Hay un artículo, el 8º, que se trata de los exploradores extranjeros. Yo soy admirador entusiasta de los exploradores españoles y quisiera consignar una larga lista de todos los nombres de esos grandes beneméritos de la Patria (...). Hay muchos exploradores, hay muchos arqueólogos excavando extranjeros que han prestado sus grandes e importantes servicios, y entre ellos me referiré a los hermanos Siret. Y vuelvo a la enmienda presentada al art.8º. se dice en el proyecto de la ley que se concede a los exploradores extranjeros la propiedad de los objetos que encuentren; pero que los duplicados los tienen que entregar al Estado. Criticaba la medida impositiva de exposición de los objetos arqueológicos propiedad de una Corporación o Sociedad, especialmente la adquisición obligatoria del Estado en caso de no ser expuestos dichas obras: En otro artículo dispone el Sr. Ministro en su proyecto que si una Sociedad o una Corporación cualquiera tiene una exposición de objetos y no la presenta decorosamente para que sirva de estudio, el Estado se apodera de ella. Yo propongo, que si el Estado, en el término de un año, no la expone debidamente no puede apoderarse de aquellos porque si la quita de un punto que aunque mal, esté expuesto, y al Estado, por falta absoluta de material, de local, de cualesquiera otra circunstancia, no la puede exponer debidamente en los Museos y tiene que relegarla a un sótano, es preferible dejar esos objetos donde se encontraron<sup>2713</sup>.*

Terminado el debate de la totalidad, se procedería a la discusión por artículos, se presentó una enmienda del senador Cortazar al artículo 1º, concretamente referente a las excavaciones paleontológicas, al puntualizar la libre disposición de tales objetos por los investigadores científicos, fueran nacionales o extranjeros, exceptuando los casos en que pudiesen encontrarse objetos de arqueología, por lo que solicitaba que fuera suprimida *el párrafo en la que se dice: siempre que se trate de objetos paleontológicos intervendrá esta ley*”, *sustituyéndola por este otro.*“(…) *siempre que en los descubrimientos paleontológicos se encuentre algo que pertenezca a la arqueología, la excavación quedará sometida a esta ley*”. El senador Herrero, miembro de la Comisión, aceptaría la enmienda de Cortazar, y por consiguiente, en tal sentido, se suprimirá después en el artículo 2º el párrafo que dice: “... quedan también comprendidos en los preceptos de esta ley los vestigios y restos paleontológicos”. El segundo párrafo del artículo 1º dirá así: “... quedan también sometidos a los preceptos de esta ley las excavaciones que se hicieren en busca de restos

<sup>2713</sup> Diario de las Cortes. Senado. Sesión de 17 de junio de 1911, p.887.

*paleontológicos, siempre que en ellas se descubrieren objetos correspondientes a la arqueología*”. Consultada la Cámara se tomó en consideración la referida enmienda del Sr. Cortazar, y aprueba el artículo 1º con ella. Se aprueba el artículo 2º en los términos ocupados por la Comisión al ocuparse del artículo 1º, aceptándose la enmienda del Sr. Cortazar. Se toma en consideración la enmienda, y sin discusión, se aprueba el artículo 3º con la enmienda del Sr. Marqués de Cerralbo, al mismo tiempo que serían aprobados sin debate los artículos 4º, 5º y 6º. Una nueva enmienda es presentada por el Marqués de Cerralbo al artículo 7º, no estando considerada en este caso por la Comisión, que presentada una segunda, queda aceptada. Nuevamente el Marqués de Cerralbo presenta una enmienda, en este caso al artículo 8º, siendo aprobada por la Cámara. Los artículos 9, 10 y 11 serían aprobados sin ningún debate. El artículo 12 sería ratificado con la modificación del periodo de tiempo que pasaba de dos a seis meses. El Marqués de Cerralbo presentaría un artículo adicional, relativo al establecimiento en el Ministerio de Instrucción Pública de un libro registro de novedades artísticas, pero la Comisión no lo considera oportuno, por lo que estimaría que en lugar de considerarse como artículo adicional, fuese más conveniente tenerla en cuenta al redactar el reglamento, por lo que el propio Marqués de Cerralbo retiraría la propuesta de enmienda. A continuación el propio Marqués de Cerralbo presentaría otro artículo adicional referente a las colecciones arqueológicas no entregadas a los Museos provinciales. El senador Herrero, miembro de la Comisión, consideraría su aceptación, al responder *a los principios que han inspirado este proyecto de ley; y cree que, en vez de ser considerado como artículo adicional, podría ser el artículo 12, y que la ley constase de trece artículos, pasando a ser art.13 el 12 anteriormente aprobado, ya que no hay razón para que ese artículo propuesto como adicional quede como un precepto extravagante del Cuerpo jurídico que forma la ley, porque es simplemente una aclaración o una adición de los conceptos que en ella vienen desarrollándose*. Una vez consultada la Cámara se tomó en consideración el artículo adicional propuesto por el Sr. Marqués de Cerralbo, y aprobado sin debate pasaría a ser el artículo 12. Un nuevo artículo adicional presentado por el propio Marqués de Cerralbo, respecto a la colocación en Museos de colecciones adquiridas, quedaría sin aprobación.

El debate sobre el proyecto de ley culminaba con la intervención del Ministro de Instrucción Pública, Gimeno, quien mostraba las razones que le habían hecho llevar a promover la promulgación de la misma: *Parecíame que cuando llegara el momento, habría un Ministro de Instrucción Pública de ser el autor de una ley que pudiera garantizar estas riquezas, tanto en el terreno de la paleontología, como de la arqueología; pero movíame hace poco, cuando pensé llegada la ocasión de iniciar este ensayo a favor de la cultura española, movíame otra consideración. Yo recuerdo, que Grecia, después de su independencia, había valerosamente luchado para la conservación de sus tesoros artísticos, porque tenía la huella sangrante, humillante realmente para su historia, de los profundos estragos hechos en sus glorias artísticas (...) bastaría citar asimismo cómo Turquía había*



*hecho valer sus derechos contra uno de los más ilustres excavadores, contra Schlieman, prototipo de los arqueólogos que han ido a buscar a las entrañas de la tierra restos gloriosos, y cómo había luchado dignamente contra las pretensiones de éste respecto a los tesoros de Priamo (...) y ver luego, confrontando estos recuerdos, cómo todos los países han atendido a la conservación de esas riquezas, y que no solamente Grecia, Turquía, Francia, Italia, sino que hasta el mismo Méjico, copiando la legislación griega, han tratado de conservar contra la codicia y la rapiña un tesoro respetable de glorias pasadas, para decirme: es imposible que España sea una excepción; en su subsuelo, encontramos todavía señales de toda clase de civilizaciones, de toda clase de pueblos (...) ¿cómo España, en cuyo subsuelo se manifiesta las huellas de tantas grandezas pasadas, podía ser una Nación que olvidara hasta este punto el deber de garantizar y conservar su tesoro? (...) Lo que me he propuesto es hacer algo siguiendo el ejemplo de las Naciones extranjeras, para garantizar los restos de civilizaciones pasadas (...). Fundado, pues, en todas estas reflexiones y miramientos, es cuando creí llegado el instante de presentar la ley que ha sido notablemente mejorada; yo me he declarado el primer sostenedor de las enmiendas, adiciones e innovaciones del Señor Marqués de Cerralbo y del Señor Cortazar.*

Aludiría como tarea primordial la confección de inventarios que consistiría en un sencillo registro de aquellas riquezas que se encuentren en poder del Estado y de los particulares, y ruego a aquéllos que las tengan, en cuyo poder se hallen, que den la nota de esa riqueza, pues esto conviene que se sepa para la curiosidad científica nuestra y para el apetito también curioso de los extranjeros (...). Sobre la intervención de los arqueólogos extranjeros, se mostraría a favor siempre que estuviera tutelado por el Estado, como así aparecía reflejada en la legislación griega: *Yo comprendo que merezcan del Sr. Marqués de Cerralbo una gran consideración aquellos sabios de fuera que vienen a enseñarnos (...) Precisamente una de las cosas que más llamaron la atención hace cuatro años al Ministro de Instrucción Pública, fue la venida a España de sabios alemanes en cuyas manos dejó aquél Ministro, que ahora habla, la libertad más completa para explorar Numancia y sus alrededores. Trajo con esto a la historia de la arqueología un descubrimiento: el del campamento de los romanos (...) Este descubrimiento me dio a entender que no podía en manera alguna, ni para ésta ni para otra cosa, cerrarse las puertas a sabios extranjeros; pero a semejanza de lo que había pasado en Grecia, muy celosa de guardar sus riquezas artísticas, aquí también había que buscar una garantía a la rapiña de los que vinieran de fuera con miras que no fueran desinteresadas, por eso no he hecho más que transcribir en parte lo que la ley griega dice (...)*<sup>2714</sup>. Lo reducido del presupuesto también sería cuestionado por el propio Ministro: *La dotación del presupuesto del Ministerio, no llena, no acierta a llenar ni en sueños las necesidades de la cultura española. ¡Qué más quisiera los Ministros que encontrar al alcance de sus manos todos los recursos que satisficieron estas necesidades! Museos pobres, riquezas artísticas no bien conservadas (...) ¿Qué he de decir, si empieza el país por no sentir esta necesidad del todo; si no hay leyes concretas encaminadas a fomentar la afición a estos intereses; si no se ayuda a*

<sup>2714</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 17 de junio de 1911, p.894.

*aquéllos pocos que estamos orientados hacia estos estudios; si sentimos a veces una indiferencia glacial ante estas iniciativas; si el Parlamento no se percata tampoco de estas exigencias; si se asusta de los créditos que se dedican a satisfacer estos requerimientos de cultura (...)*<sup>2715</sup>. Finalmente quedaría aprobado definitivamente el proyecto de ley, quedando articulado en 13 artículos, después de haber sido aprobado algunas enmiendas presentadas por el Marqués de Cerralbo.

El Proyecto de ley del Senado sería remitido al Congreso el 19 de junio de 1911<sup>2716</sup>, nombrándose una Comisión formada por los Sres. Jimeno Rodríguez, Burell, Marqués de la Vega Inclán, Rivas, López, Bullón<sup>2717</sup>, siendo nombrados Presidente y Secretario del mismo, Burell y Gimeno el 20 de junio de 1911<sup>2718</sup>. El Dictamen de la Comisión sería propuesto a la aprobación del Congreso el mismo día<sup>2719</sup>. El 21 de junio comenzaría el debate en el Congreso, debatiéndose artículo por artículo y teniendo como cuestión central el régimen jurídico de los objetos descubiertos. El Marqués de Lerma pondría en cuestión la propia concepción jurídica de las antigüedades: *así como el artículo 1º se refiere exclusivamente a las excavaciones y define lo que son y el objeto que estas excavaciones puedan perseguir, comprendiendo también de una manera algo extraña, dentro de esta definición, las excavaciones que se hiciesen para buscar objetos paleontológicos, y las que, por casualidad, dieran también algo que entrase dentro de los términos de la Arqueología (...)* el art.2º, *al entrar a definir las antigüedades, incluye inmediatamente dentro de su mismo texto otra clase de preceptos que se refieren a lo que ya no es producto de las excavaciones; y así habla de las ruinas de los edificios antiguos que se descubran y a los edificios de interés artístico que estén abandonados á los estragos del tiempo. Y es que la contradicción dialéctica conllevaba un régimen jurídico que iba más allá de lo puramente semántico, ya que estaba defendiendo la libre acción del Estado sobre bienes que estaban insertado en el dominio privado: Yo, en materia de protección de los objetos de arte, ya sean hallados en excavaciones, ya existan sobre el suelo y sean conocidos, soy muy poco partidario de esa protección que por algunos se preconiza. Entiendo que el Estado debería limitar su acción en esta materia a procurar, con un espíritu muy amplio y con muy buena fe, que todos aquellos que posean objetos de valor que tengan importancia como antigüedades acudan a él, para que el Estado, por medio de personas peritas, adquiriese aquello que verdaderamente sería una pena que saliese del acervo nacional; pero no opino lo mismo respecto a aquella otra clase de trabas que el Estado ponga para el desenvolvimiento de lo que es una industria y la satisfacción de una necesidad artística, del tráfico sobre objetos que puedan estar en el comercio y ser importados y exportados sin que el acervo nacional artístico padezca. Todas estas precauciones, aparte de ser inútiles, son extraordinariamente vejatorias y no producen el efecto que desean el legislador y las personas amantes de los objetos artísticos que tienen esas tendencias (...).* Mi objeto

---

<sup>2715</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 17 de junio de 1911, p.895.

<sup>2716</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.62, 19 de junio de 1911, p.1625.

<sup>2717</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.62, 19 de junio de 1911, p.1638.

<sup>2718</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.63, 20 de junio de 1911, p.1681.

<sup>2719</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, núm.63, 20 de junio de 1911, p.1682.

*actual es este; yo pregunto, al señor Ministro de Instrucción Pública: ¿el art.9º se refiere exclusivamente a las antigüedades producto de las excavaciones, o se refiere a las que se llaman antigüedades en general que estén en posesión de particulares, sean Corporaciones o sean particulares? Esta es una de las cosas que más me interesan, puesto que habiéndose intentado en diversas ocasiones dictar proyectos de ley referente a protección de objetos artísticos o protección de la propiedad o estudio de objetos artísticos, pudiere caber la duda a muchas personas, y á mí me cabría sin una explicación categórica del señor Ministro de Instrucción Pública, de que este artículo tiene una trascendencia y un alcance superiores á lo que hace suponer el contexto general de la ley<sup>2720</sup>.*

La intervención del Marqués de Lerma continuaría centrándose en el análisis del artículo 5 del proyecto de ley: *Otra cuestión que no deja de preocuparme es esta á que se refiere el art. 5º. Sabe S.S. mejor que yo, y la Cámara seguramente no lo ignora, el precepto del Código Civil que se refiere á los tesoros, en los cuales cabe comprender naturalmente estas cosas, y allí dice que cuando un tesoro sea descubierto por cualquier sujeto éste podrá beneficiarse de la mitad del valor de él, siendo la otra mitad de la propiedad del dueño del terreno. Indudablemente, teniendo en cuenta este precepto del Código Civil el segundo párrafo de este artículo lo ha querido evitar; pero nos encontramos con el primero que es un precepto terminante; y al Sr. Ministro de Instrucción Pública no se le ocultan las consecuencias que pueda tener, puesto que dicen que serán de la propiedad del Estado las antigüedades casualmente en el subsuelo o encontradas al demoler edificios antiguos; de manera que el concepto de propiedad que establece el Código civil, aquí se atribuye únicamente al Estado, aunque tenga la obligación de indemnizar, pero esta obligación de indemnizar es la que a mí me preocupa, porque con arreglo a este artículo todo aquel que se encuentre un objeto artístico, un ánfora romana, unas monedas, aunque sólo sean de las que existen en el comercio corriente y que no tengan gran carácter artístico, desde el momento en que se considera aquello propiedad del Estado, el que se lo encuentre no tendrá más que acercarse a las oficinas públicas y pedir que se le entregue la mitad del valor de ese objeto y que la otra mitad vaya al dueño del terreno, porque el Estado desde luego se ha declarado propietario de todas aquellas antigüedades que casualmente se hayan descubierto en el subsuelo ó se encuentren al demoler edificios antiguos. Se me dirá que en el artículo siguiente se encuentra una atenuación de esta idea; pero el artículo 6º se refiere a los objetos artísticos o arqueológicos procedentes de excavaciones; de manera que aquí, el legislador o el que proyecta como legislador, establece dos casos distintos, y en el caso de las excavaciones, de ese trabajo meditado que ha sido definido en el artículo 1º, entonces el Estado queda en libertad de adquirir o no el objeto, de la misma manera que en artículos anteriores ha dicho que el Estado podrá apoderarse de un terreno, conforme a las leyes que rigen la expropiación, o indemnizar por los daños que produzcan las excavaciones que realice; pero por esta misma razón de que el art.6º se refiere a un caso determinado, que es el de las excavaciones, todos aquellos otros objetos encontrados por casualidad que puedan calificarse de antigüedades con arreglo al art.5º pertenecen al Estado, y, por consiguiente, aquel que los encuentre se llega a su dueño, se los da y le pide la*

<sup>2720</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Núm.64, Sesión de 21 de junio de 1911, p.1708.

*indemnización correspondiente. Esto merece aclaración por parte del señor Ministro, aclaración que no será suficiente que venga en el reglamento, porque el reglamento será ejecución de lo que aquí decidamos, pero es muy conveniente que aquí se establezca la interpretación auténtica de su autor, con la colaboración de la Cámara (...)*<sup>2721</sup>.

El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Gimeno, defendería la situación de las excavaciones arqueológicas que se estaban realizando bajo instancias oficiales, especialmente en el caso de las Corporaciones provinciales y municipales *a fin de buscar en el subsuelo de España restos, vestigios, indicios de pasados esplendores*, por lo que consideraba que el artículo 7º *es una garantía (...)* Y trasladándose de la Corporación Municipal de Barcelona y de su Diputación provincial, *no hay ni siquiera asomo del recelo de que esta última parte del párrafo leído pueda tener relación alguna con dichas excavaciones*. A continuación replicaría al Marqués de Lema en relación a la definición de antigüedad por lo que subrayaba que cuando en el art.9º y en todos los demás se habla de antigüedades, *conste que hago la declaración solemne (...) de que esta palabra se refiere a las antigüedades que son producto directo de excavaciones en el subsuelo (...) hay que tener en cuenta que esta ley se refiere a toda clase de excavaciones: á aquellas para las cuales se exige una técnica complicada y difícil, que ha sido más complicada y difícil desde estos últimos tiempos, y que asegura la eficacia y la utilidad de los hallazgos, y a aquellas otras que se reducen al encuentro causal que puede salir a la mano de un hombre no ducho en estas cosas, completamente inculto, perteneciente al vulgo, para el cual, sí, la mano del Estado arrojándose sobre él, imposibilita que se haga objeto de cierto comercio, que no quiero calificar, el objeto del hallazgo (...)* Quiero decir que cuando las excavaciones se hagan metódica y ordenadamente, la inspección del Estado, aquí como en todos los países que han cuidado bien de garantizar su riqueza oculta bajo tierra, bastará; pero cuando las excavaciones no se hagan metódica y ordenadamente, el hallazgo tendrá, cuando el objeto arqueológico o histórico sea de relevante mérito, la garantía de la posesión del Estado, y en esto no hemos hecho más que imitar a todos los países que han querido garantizar la riqueza artística del subsuelo que son ciertamente, excepto la de Francia, más duras y exigentes que las nuestras (...)<sup>2722</sup>. El Marqués de Lema nuevamente se acogía al Código Civil como referente legal del régimen de los bienes del subsuelo, por lo que criticaba como en el artículo 5º de la ley era el propio Estado el que se convertía en el verdadero dueño de los bienes arqueológicos: *Actualmente el Código Civil define, en mi opinión de una manera perfectamente clara, el asunto, y dice: el tesoro que se encuentre por casualidad se divide por mitad entre el que lo encuentre y el propietario del terreno. Si por las necesidades de la cultura, ó por consideración al progreso de las ciencias y de las artes, el Estado necesitase de ese objeto, utilizará los medios que tiene en las leyes, expropiándolo o adquiriéndolo y dando la consiguiente indemnización. Pero en este art.5º, tal como está redactado, las tornas se cambian, y es el Estado el que se declara siempre propietario de todo objeto que se encuentre casualmente en el subsuelo. De*

---

<sup>2721</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Núm.64, Sesión de 21 de junio de 1911, p.1709.

<sup>2722</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Núm.64, Sesión de 21 de junio de 1911, pp.1710-1711.

*manera que el Estado se encontrará en esta situación. Aunque no quiera, con arreglo al texto de este artículo, es propietario de todo cuanto se encuentre, y además tiene el deber de indemnizar á aquel que se presente con el objeto y diga: dame su valor. El quid de la cuestión se centraría en el cambio de roll del propio Estado como dueño de los bienes arqueológicos encontrados al considerar desfavorable que pudiera adquirir bienes que en realidad no tuviesen valor: ¿Es que el Estado, a pesar de ser propietario, tiene derecho de renunciar a esa propiedad sin que el descubridor pueda alegar contra él derecho alguno a ser indemnizado? Esta es mi pregunta; de modo que las cosas se cambian. Yo preferiría el sistema antiguo, es decir, que el descubridor, fuera o no propietario del terreno, si el objeto valía la pena, si era una antigüedad digna de ser conservada en nuestros Museos, se la ofrecía al Estado, o si el Estado tenía conocimiento del hallazgo, decía: venga acá. Si el Estado quería limitar esto más, podía haber dicho: todo aquel que encuentre en el subsuelo un objeto que constituya una antigüedad, tendrá el deber de ponerlo en conocimiento del Estado para que éste lo adquiriera o no según tenga por conveniente; pero el declararse el Estado propietario de cuanto se encuentre y en la obligación de indemnizar al que encuentre el objeto, tendrá para el Estado consecuencias de orden pecuniario, y además de orden ridículo, porque sabe Dios los objetos que algunas veces tendrá que adquirir. Por eso comprenderá S.S. que no era huera esta insistencia, que tiende á evitar un verdadero peligro (...) <sup>2723</sup>. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Gimeno, replicaría que a pesar de ello siempre habría una mayor garantía que el Estado adquiriese los bienes arqueológicos: (...) el derecho del Estado es renunciable hasta cierto punto; podrá o no podrá renunciarle. Además, aunque no pudiera, si el valor de lo encontrado es escaso, el peligro para el Erario sería muy pequeño, y, en cambio, si el valor es grande, claro es que la garantía del Estado tendrá que imponerse para la conservación del objeto. Pero en fin, ya lo dice el artículo siguiente. Eso es un derecho que yo sólo diré que pueda renunciarse, que puede tomarse o no tomarse. Según el valor de lo encontrado, realmente si este valor es de mucho interés, ya procurará el Estado, o el Ministro que se encuentre en este sitio, garantizarlo, y si no lo es, la pérdida será muy pequeña (...) <sup>2724</sup>. Nuevamente el Marqués de Lerma volvería a utilizar el mismo argumento jurídico en el ámbito conceptual de la propiedad de los bienes arqueológicos hallados: (...) la propiedad establecida en este artículo a favor del Estado, de las antigüedades descubiertas casualmente, llevaba consigo un derecho igualmente por parte del descubridor, que en cualquier momento podía hacerse efectivo. No es suficiente decir que el objeto valdrá mucho o valdrá poco. Si vale mucho, el Estado no tiene, naturalmente, más que adquirirle, porque será un objeto de mérito. Perdóneme el Sr. Ministro de Instrucción pública que le diga que quizá este concepto no es completamente acomodado a lo que S.S. ha querido decir, porque objetos hay que evidentemente tienen mucho valor, aunque no sean objetos de tal rareza, y, sobre todo, que el Estado no tenga otros de igual carácter y le obliguen a adquirir esos mismos objetos. Pero S.S. comprenda el peligro tan grande que vendría para el Estado, en el caso de que todos aquellos que descubrieran objetos de poca importancia, de poco valor, pero que fueran en número*

<sup>2723</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Núm.64, Sesión de 21 de junio de 1911, pp.1711-1712.

<sup>2724</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Núm.64, Sesión de 21 de junio de 1911, p.1713.



*tal y tan considerable, se creyeran en el caso de que el Estado se los satisficiera. ¿No daría esto origen verdaderamente á una demanda por parte de estos felices descubridores, que exigiese un dispendio grande por parte del Estado, y, sobre todo, que trajese para el Estado una cosa peor, que es el ridículo? Porque ridículo sería que se estableciera una oficina en el Museo, en el propio Ministerio ó en cualquiera dependencia del Estado donde fuese aquel que se encontrara una moneda de las muchas que se encuentran hoy, como S.S. sabe perfectamente, y que no dejan de tener para alguna colección particular, pero no para el Estado, que tiene su monetario en el Museo Nacional, para el cual sólo necesita algunas piezas raras ó extrañas que le faltan (...). Al hablar S.S. de que el Estado puede o no aceptar esos objetos que se le presenten, es decir, al hablar S.S. de que el Estado tiene un verdadero derecho de opción, se me ocurre decir que ojalá se hubiese establecido así en el artículo, porque se declara por el art.5º. que el Estado tiene derecho á todas las antigüedades que se descubran en el subsuelo, cualquiera que sea su condición, y hay que tener en cuenta que todo derecho es renunciable, pero es cuando no crea otro derecho al mismo tiempo. Su señoría ha creado un derecho, el de la indemnización por parte del descubridor, y es evidente que éste podrá alegar el título que el art.5º le concede para dirigirse al Estado y reclamar lo que crea el pago debido de su objeto. Por cierto que al tratar esta cuestión se me ocurre una cosa á la que antes no me referí y que tiene grandísima importancia porque deroga el Código Civil. Yo supongo que el Sr. Ministro de Instrucción Pública no habrá tenido el propósito al presentar este proyecto, de derogar una porción de artículos del Código Civil<sup>2725</sup>. El Marqués de Lerma defendería a su vez el derecho de opción por parte del Estado: Es indudable que en vez del establecimiento de una propiedad constante a favor del Estado, como aquí se establece, hubiera sido muy preferible que se hubiese dicho en este artículo que se concedía el derecho a la opción; es decir que el Estado tenía la opción en el caso de todas las antigüedades que se descubriesen, para elegir aquellas que convinieran para la cultura nacional, dentro del concepto que el Estado debe de tener; es decir de aquellos objetos que completen sus colecciones y faciliten, por consiguiente, la difusión de los conocimientos que se adquieren con la contemplación de esas colecciones, y no naturalmente, desde el punto del valor del objeto (...) Con arreglo al Código Civil y a toda nuestra legislación, es evidente que para poder hacer excavaciones en propiedades particulares, el Estado, mucho más si él concede ese derecho a Corporaciones o a particulares, deberá instruir un expediente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, y puede el Estado, o en su lugar los particulares, Corporaciones o individuos que a él se subroguen, cumplir con los preceptos de la ley y respetar el derecho de la propiedad, indemnizando al propietario de los perjuicios que las excavaciones ocasionen en su finca, según tasación legal (...).*

El debate se reanudaría el mismo día 21 de junio de 1911 quedando aprobado sin discusión los artículos 1º al 7º, al mismo tiempo que una vez completado algunas expresiones del 8º por el diputado Bullón, sería aprobado sin ninguna otra discusión los artículos 9º al 13 del dictamen, por lo que pasaría definitivamente a la aprobación definitiva del Congreso y sancionado

---

<sup>2725</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Núm.64, Sesión de 21 de junio de 1911, p.1714.

posteriormente por el Rey<sup>2726</sup>. El Proyecto de ley sería aprobado definitivamente estableciendo las reglas á que han de someterse las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de ruinas y antigüedades<sup>2727</sup>. La Ley fue publicada en la Gaceta de Madrid de 8 de julio de 1911, enmarcada como hemos apuntado anteriormente en una situación desoladora del panorama artístico español, especialmente para mitigar la desaparición de un gran número de antigüedades, que debido a la exportación se estaban perdiendo en estos años. Se trataba del quinto proyecto que frustradamente en los últimos diez años se había presentado en el Congreso, en este caso por Amalio Gimeno, Ministro de Instrucción, que esta vez si fue aprobada. Posteriormente, sería promulgado el Reglamento de 1912.

### **5.3. El triunfo del intervencionismo público en el seno de las excavaciones arqueológicas: El análisis de la ley.**

La ley de 1911, estaría estructurada por un preámbulo, que no llegó a publicarse y trece artículos y el Reglamento del 1 de marzo de 1912 se articularía en dos capítulos, el primero dedicado a las excavaciones, ruinas y antigüedades y el segundo, a la administración del patrimonio arqueológico. El primer capítulo está formado por veintiséis artículos, que supone sin duda una aportación excepcional en la legislación española, donde se plasma la cuestión de la propiedad privada y el interés público del bien encontrado. Por otra parte, en el segundo capítulo, se articula todo el marco administrativo que se va a incorporar en el organigrama español, como la creación de la Junta Superior de las Excavaciones y Antigüedades. Los conceptos utilizados en la Ley, el Reglamento lo especifica aún más, convirtiéndose en un referente en algunos puntos de la actual legislación española, la Ley 16/1985.

Podemos enunciar algunos puntos excepcionales que se convertirían en puntos vitales del ordenamiento jurídico del Patrimonio Arqueológico:

1º) Un intento de responder jurídicamente al concepto de los bienes arqueológicos y las excavaciones arqueológicas.

2º) La autorización administrativa como potestad pública del Estado en las excavaciones arqueológicas.

La tutela pública del Estado sobre las excavaciones arqueológicas realizadas por particulares y Corporaciones Públicas, estableciendo la obligación de ser autorizada por la nueva administración nacida del seno de la Ley, la Junta de Excavaciones.

La potestad del Estado en realizar excavaciones en dominio privado, por la que se aplica la declaración de expediente de utilidad pública

<sup>2726</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Núm. 64, Sesión de 21 de junio de 1911, p.1724. El Proyecto de Ley aparece publicado en el Apéndice 4º al Núm.64 del Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados.

<sup>2727</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, núm.64, 21 de junio de 1911, p.1724.

3º) El régimen patrimonial de los bienes arqueológicos descubiertos: El equilibrio entre el derecho de la propiedad privada y la defensa de los intereses generales.

- a) El derecho de tanteo y retracto, en el caso de aquellos bienes que vayan a ser enajenados por los particulares.
- b) El respeto al derecho de la propiedad privada de los bienes encontrados en las excavaciones arqueológicas.

### **5.3.1. Un intento de responder jurídicamente al concepto de los bienes arqueológicos y las excavaciones arqueológicas.**

Sería con la Ley de 1911 cuando contemplamos por primera vez la regulación específica de los Bienes Arqueológicos. La nueva mirada que se fue produciendo de éstos, debido a una nueva concienciación en el ámbito social, dio como resultado la consideración de su carácter específico, digno de proteger como identidad propia, que se proyectaría en su regulación propia. En el Preámbulo publicado en la Gaceta de Madrid, 159, de jueves de 8 de junio de 1911, que luego no aparece publicado acompañando a la Ley se hacía una exaltación a la arqueología, haciendo referencia a las excavaciones de Herculano, Pompeya, Creta, etc. Asimismo se recogía cual era el objetivo principal que tenía la ley: *la defensa de los vestigios artísticos que vinculan el recuerdo de nuestras glorias pasadas, constituyendo un elemento insustituible de la riqueza nacional*. Siguiendo a Ana Yáñez Vega, en esta frase, se pone de relieve uno de los problemas que, desde siempre, han afectado a la arqueología: *el peligro de destrucción que puede afectar a los restos arqueológicos desde varios frentes. Se habla también de vestigios artísticos. Y en este sentido se recoge la concepción de la Arqueología como ciencia preocupada por objetos artísticos, aunque más adelante, en el articulado de la Ley, se definen las antigüedades no solo todas las obras de arte, sino también los productos industriales. Se va caminando ya, y la legislación se hace eco de ello, del anticuario al arqueólogo. Y, en definitiva, hacia una concepción más científica de la Arqueología*<sup>2728</sup>. En el Preámbulo se utiliza todavía un lenguaje puramente nacionalista con expresiones como *recuerdos de nuestras glorias pasadas, riqueza nacional, defensa del depósito sagrado del arte patrio*.

La Ley define al bien jurídico protegido como *todas las obras de arte y productos industriales pertenecientes a las Edades Prehistóricas, Antigua y Media* (art.2), ampliando el Reglamento hasta el límite temporal de la etapa de Carlos I, por lo que los bienes de otras épocas quedaban fuera, al no ser considerado antigüedades, en cierta manera seguía planteándose la herencia de la ilustración. Cabe recordar que en el decreto de institución del Museo Arqueológico Nacional de 1867 se consideraban objetos arqueológicos *todos los pertenecientes a la antigüedad, a los tiempos medios y al renacimiento, que sirvan para esclarecer el estudio de la Historia, el arte, o de las Industrias en las indicadas*

---

<sup>2728</sup> YÁÑEZ VEGA, Ana “Estudio sobre Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911 y el Reglamento para su aplicación de 1912”, MORA, Gloria (Coord.), *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*, Universidad de Málaga, Servicios de Publicaciones, 1997, pp.423-429.

*épocas. Se exceptúan los que por su índole deban corresponder a los Museos de pinturas. Además se añade de forma confusa: los edificios de interés artísticos abandonados a los estragos del tiempo*, ya que en principio era una normativa específica dedicada al patrimonio arqueológico, reflejándose todavía el confusionismo que existía todavía entre la Historia del Arte y la Arqueología. En principio, es el valor de la antigüedad la que impera como fundamento jurídico a proteger, que supera por primera vez la idea de que lo artístico era lo único que constituía patrimonio, de ahí que se establezca una dimensión temporal que llega en este caso a la etapa de Carlos I. Al mismo tiempo se puede apreciar que poco a poco se está perfilando el bien arqueológico como bien jurídico a proteger, ya que se considera como tal aquellos que sean susceptibles de metodología arqueológica, que será precisamente en la legislación contemporánea lo que verdaderamente califica estos bienes como tales<sup>2729</sup>. Sin embargo, no hay duda de que se está reforzando jurídicamente el perfil de este bien en esta nueva normativa.

Sin duda otra de las novedades fundamentales sería la promulgación de la *Ley estableciendo las reglas a que han de someterse las excavaciones arqueológicas, artísticas y científicas y la conservación de las ruinas y antigüedades* del 7 de julio de 1911, y su Reglamento, el Real Decreto, de 1 de marzo de 1912, por la que nacía al amparo del desarrollo que la arqueología como actividad científica, especialmente desde 1879 con el descubrimiento de las Cuevas de Altamira. En su artículo 1º ya aclara el contenido del concepto: *Las remociones deliberadas y metódicas de terrenos respecto a los cuales existan indicios de yacimientos arqueológicos, ya sean restos de construcciones o restos de antigüedades*. Al mismo tiempo se regulaba ya el patrimonio paleontológico: *Quedan también a los preceptos de esta Ley las excavaciones que se hicieren en busca de restos paleontológicos, siempre que en ellas se descubrieren objetos correspondientes a la arqueología*. En el Reglamento de 1912, en su artículo 1º se ampliaba el concepto de excavación al considerar también como tal *los trabajos de rebusca arqueológica que tenga carácter espeleológico o submarinos y otros similares*. Siguiendo a la profesora Yáñez y Larvin, la Ley de 1911 admitía *la existencia de un método arqueológico, aunque solo sea referido a las excavaciones*. Se establecía, por consiguiente, el concepto de excavación, introduciendo la metodología arqueológica de carácter científico como fundamento para identificarlo como tal, de ahí que hasta que no asistimos al desarrollo de la arqueología como ciencia, era imposible que fuera recogido por la jurisdicción española. En el Preámbulo se contenía expresiones como *riqueza nacional, glorias pasadas o defensa del depósito sagrado del arte patrio*, que evidenciaban un contenido político. Estos valores de exaltación patriótica eran utilizados para respaldar los

<sup>2729</sup> Recuérdese que en la Ley 16/85 se define como bien arqueológico *aquellos bienes muebles e inmuebles (...) susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica (...)*.

intereses del sistema político español en un momento en el que los nacionalismos periféricos amenazaban la identidad nacional.

### **5.3.2. Un nuevo marco administrativo: La creación de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.**

La creación de la Junta de Excavaciones y Antigüedades significaría el final de la responsabilidad directa de la Real Academia de la Historia en asuntos referidos a antigüedades. Sin embargo, debemos de precisar que fueron un gran número de académicos los que participaron en el nuevo órgano gestor. Lo que no cabe duda es que se pasaba de un sistema tutelar que había estado en manos de instituciones eruditas a pasar a formar parte del organigrama del Ministerio de Instrucción Pública, verdadero germen de la centralización administrativa del Patrimonio Monumental, que tendría su culminación en el régimen del Directorio Militar. El espíritu centralista que envolvería la nueva administración estaría recogido en el artículo 27 del Reglamento de 1912 en el que se dispondría que *el cumplimiento de la ley de 1911 quedaría encomendado al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y a una Junta superior de Excavaciones y Antigüedades*, completándose el organigrama con la figura del Inspector general de Bellas Artes como comisario general del ramo, que sería el encargado de la ejecución de los acuerdos, al mismo tiempo que las autoridades provinciales y locales del orden gubernativo habrían de prestar siempre el apoyo de su autoridad cuando a ello se le requiriera (art.27 del Reglamento).

En el artículo 28 del Reglamento de 1912 dispondría la composición de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, un presidente, Ex Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y académico de número de la Historia o de las Bellas Artes de San Fernando, el Inspector General de Bellas Artes, como vocal nato, a los que se unirían otros que tendrían que poseer algunas de las siguientes condiciones: académico de número de dichas Reales Academias, catedrático de universidad en asignaturas que tenga relación con arqueología o el Arte, jefe del Cuerpo facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos o excavador de reconocida eminencia, resaltando que sería nombrado por un Real decreto. El cargo de secretario de la Junta será desempeñado por uno de sus vocales, y percibirá una gratificación compatible con el sueldo de que disfrute (art.29.1 del Reglamento), al contrario de los demás cargos que serían honoríficos y gratuitos (art.29.2 del Reglamento). Los cargos de la Junta Los individuos de la Junta Superior no podrían ser designados para los cargos delegados encargados por el Estado de la dirección o de la inspección de las excavaciones, ni tomar parte como vocales en las Comisiones de precios o de premios (art.29.3 del Reglamento). La Junta Superior tendría su despacho y archivo en el Ministerio, asignándole escribientes y ordenanzas, según se establezcan en sus plantillas (art.30 del Reglamento). La Junta Superior de Antigüedades y Excavaciones sería nombrada mediante **Real orden de 29 de**



**marzo de 1912**, siendo otorgado el cargo de Presidente a Amalio Gimeno y Cabañas, ex ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de San Fernando, y Vocales, Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, Académico de número de la de Historia; Mariano Benlliure y Gil, Académico de número de la de Bellas Artes de San Fernando; Elías Tormo y Monzó, Catedrático de Historia de las Bellas Artes en la Universidad Central y Claudio López y Bru, Marqués de Comillas, y Benigno Vega Inclán, Marqués de la Vega Inclán, como personas de reconocida competencia.

Las funciones de la Junta Superior de Excavaciones estarían perfectamente perfiladas en el artículo 31 del Reglamento, donde se planteaba una verdadera centralización administrativa: *1º) Ser oída en todos los casos de aplicación de la Ley y Reglamento y en los expedientes que deban resolverse de Real Orden, salvo los casos de urgencia, en especial en periodos de vacaciones acostumbradas o habituales; 2º) Proponer los individuos de las Academias que deban constituir, en cada caso, las Comisiones a que se refiere este Reglamento; 3º) Proponer los Académicos, Profesores o Archiveros Bibliotecarios que deban ser designados para los cargos de inspectores; 4º) Redactar el Reglamento interior y las instrucciones generales que habrán de aprobarse de Real Orden y 5º) Proponer cuanto sea conveniente para la mejor eficacia de la Ley.* La Junta Superior de Excavaciones, a cargo de Secretaría, será la encargada de la formación y conservación de los registros de las excavaciones y de sus concesiones, así como de la guarda y conservación de los inventarios de ruinas y antigüedades, del registro de las minas y el de partes y comunicaciones a ellas referentes, con el cuidado de los índices y su constante renovación al día (art.32.1 del Reglamento). Los índices se llevarían por medio de cedularios alfabéticos (art.32.2). La Junta tenía que llevar un Registro de excavaciones y de sus concesiones, así como la guarda y conservación de los inventarios de ruinas y antigüedades, Además se llevaría en la Secretaría un Libro-Registro de las concesiones de excavaciones solicitadas (art.33 del Reglamento). Se establecerá un mecanismo administrativo muy preciso para la excavación, que podemos resumir en los siguientes puntos: *1º) En la solicitud para realizar excavaciones se hará constar un croquis o plano en que se fije la situación topográfica de lo descubierto o que se vaya a excavar o explotar, una sucinta relación del desprendimiento, manifestando el fin que se persiga, arqueológico, paleontológico o artístico (por lo que se pone de manifiesto la separación que se va configurando en estos tres campos de investigación), el plan de exploración y sistema a observar en los estudios de lo que se vaya descubriendo (...)* (art.33). *2º) Una vez pasado los quince días de ser solicitada la inscripción se entregaría, en caso de que fuese concedido, la autorización acordada, precisándose que se reconoce la legítima adquisición de los objetos hallados.*

### 5.3.3. La autorización administrativa como potestad pública del Estado en las excavaciones arqueológicas.

Es el Estado el que otorga la autorización de las excavaciones arqueológicas, mediante una concesión administrativa, como así lo establece el artículo 7º de la Ley y el artículo 14.1 del Reglamento. De esta forma se establecía la obligatoriedad de la autorización del Estado para todas las excavaciones arqueológicas que fueran realizadas tanto por los particulares como por las sociedades científicas españolas y extranjeras, tanto en terrenos públicos como privadas, bajo la inspección de un delegado nombrado por la Administración Pública, con ello se intentaba paliar la pérdida patrimonial que había significado el libre acceso de los yacimientos arqueológicos todo tipo de particulares y corporaciones, tanto pública como privadas. Al mismo tiempo el Estado podía otorgar autorización a las Corporaciones Oficiales de la Nación para hacer excavaciones en terrenos públicos y privados (art.7 de la Ley). A raíz de la publicación de la Ley de 1911 se incrementaría el número de autorizaciones de excavaciones arqueológicas por el Estado, que ha sido recogido en el siguiente cuadro, que aparecen recogidos como disposiciones normativas en la Gaceta de Madrid.

Regulación Normativa	Corporaciones Públicas, Privadas y particulares autorizados	Asentamiento donde se autoriza la excavación arqueológica	Obligaciones contraídas por el particular o Corporación Pública y privada	Régimen patrimonial del dominio donde se efectuará las excavaciones
Real Orden de 9 de julio de 1914 (Gaceta de Madrid, núm.194, 13 de julio de 1914 p.122).	Ricardo Morenas de Tejada	San Esteban de Gormaz	artículo 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y el 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Propiedad privada
Real orden de 17 de octubre de 1914 (Gaceta de Madrid, núm.295, 22 de octubre de 1914, p.180).	D. Enrique Breuil, Catedrático y en nombre del Instituto de Paleontología Humana de París	La cueva del Parpalló, cerca de Gandía (Valencia).	artículos 8º, apartado 4º y 5º de la Ley y 17 y 19 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Propiedad privada y pública
Real orden de 23 de octubre	Enrique Aguilera y Camboa,	localidades de las provincias de	artículos 7º y 14 de la Ley de 7	Propiedad privada

de 1914 (Gaceta de Madrid, núm.300, 27 de octubre de 1914, p.228).	Marqués de Cerralbo	Soria, Guadalajara y Zaragoza	de julio de 1911 y Reglamento de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 20 de noviembre de 1914 (Gaceta de Madrid, núm.331, 27 de noviembre de 1914, p.577).	Juan Cabré Agulló, Comisario de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas	La Cueva de las Pardinas de Santa Elena (Jaén)	Artículo 7º de la ley de 1911 y artículo 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Propiedad privada y pública
Real Orden 9 de noviembre de 1914 (Gaceta de Madrid, núm.316, 12 de noviembre de 1914, p.411).	Ventura Fernández y López, Profesor del Instituto de Figueras	El Circo Romano, de Toledo	artículo 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y artículo 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Propiedad privada y pública
Real orden de 31 de octubre de 1914	El Marqués de Cerralbo	La cueva de la Paloma de Soto de Regueras (Oviedo)	Cesión de la autorización de las excavaciones arqueológicas	Propiedad privada y pública
Real orden de 31 de octubre de 1914 (Gaceta de Madrid, núm.311, 7 de noviembre de 1914, p.364).	Doña Mercedes del Prado y Benavides	Una finca denominada Calar del Molino de los Alamos, sitio denominado Magón, término municipal de Villacarrillo, provincia de Jaén	Artículo 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y el 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912.	Excavación arqueológica en su propia propiedad.
Real orden de 26 de febrero de 1915 (Gaceta de Madrid, núm.68, 9 de marzo de 1915, p.745).	la Comisión de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas	cuevas de la Peña, el término de San Román de Pravia (Oviedo)	Artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, y 13 y 33 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	

Real orden de 28 de mayo de 1915 (Gaceta de Madrid, núm.150, 30 de mayo de 1915, pp.567-568).	Enrique Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo	diferentes lugares de las provincias de Guadalajara y Soria	Artículos 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 28 de mayo de 1915 (Gaceta de Madrid, núm.150, 30 de mayo de 1915, p.568).	Adolfo Aragonés, facultativo del Alcázar de Toledo	los terrenos próximos a un torreón existente por bajo del Alcázar de Toledo y en la margen derecha del Tajo	Artículos 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 7 de diciembre de 1915 (Gaceta de Madrid, núm.345, 11 de diciembre de 1915, pp.651-652).	Manuel Caballos, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Córdoba	La Necrópolis prerromana y romana (Córdoba).	Artículo 7º de la Ley de julio de 1911 y 13 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 10 de marzo de 1916 (Gaceta de Madrid, núm.78, 18 de marzo de 1916, p.647).	Ricardo Morenas de Tejada	El pueblo de Vild', partido judicial de Burgo de Osma, provincia de Soria	Artículos 7º del julio de 1911 y 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 20 de mayo de 1921 (Gaceta de Madrid, Núm.350, 30 de mayo de 1921, pp.852-853).	El Institut d'Estudis Catalans, de Barcelona	una necrópolis romana que se halla en el "Huerto de Cau Poll", sito en el término de Santa Eulalia, de la isla de Ibiza,	Artículos 7º de la Ley y 13 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 18 de julio de 1922 (Gaceta de Madrid, núm.203, 22 de julio de 1922, p.246).	César Morán Bardón	El sitio denominado "El Cerro del Barrueco", entre las provincias de Alava y Salamanca		

Real orden de 15 de febrero de 1923 (Gaceta de Madrid, Núm.53, 22 de febrero de 1923, p.652).	Un Delegado regio nombrado por el Estado	la loma de “La Alcudia”, en Elche (Alicante)	El artículo 4º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 8º del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	
Real orden de 18 de julio de 1923 (Gaceta de Madrid, núm.209, 28 de julio de 1923, pp.331-332).	Nicomedes Mateos, Director de las Revistas Gratuitas de Cultura, Patria y Letras.	el castro denominado “Peña del Castro”, sito en el término municipal de Villadecanes, partido judicial de Villafranca del Bierzo (León)	los artículos 7º y 14 de la ley y Reglamento citado	
Real orden de 17 de julio de 1923 (Gaceta de Madrid, Núm.205, 24 de julio de 1923, p.270).	Juan Manuel Romero Martín	El sitio denominado Cueva de la Mora, cerca del pueblo de Jabugo (Huelva)	El artículo 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	
Real orden de 8 de agosto de 1923 (Gaceta de Madrid, núm.225, 13 de agosto de 1923, p. 679).	Pedro Bosch y Gimpera, Catedrático de la Universidad de Barcelona y Director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Instituto de Estudios Catalanes.	Cuevas neolíticas y eneolíticas existentes en Cataluña	Los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 20 de septiembre de 1923 (Gaceta de Madrid,	Manuel Aulló y Costilla, Ingeniero de Montes.	Las provincias de Segovia y Córdoba	El artículo 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y en el 14 del Reglamento de	



Núm.269, 26 de septiembre de 1923, p.1234).			1º de marzo de 1912	
--	--	--	------------------------	--

Díaz Andréu señala como desde el periodo de 1912 a 1939 se fueron produciendo una amplia variedad en la identidad de los investigadores autorizados por la Junta de Excavaciones y Antigüedades, de esta manera tendríamos que un 38'9 % trabajan como arqueólogos profesionales, entre los que se encontraban los que trabajaban en museos (23'7 %) y universidades (13'5%), incluyendo a Cabré, (1'7%), quien se le puede definir como el primer arqueólogo de gestión de la arqueología española, un 15'2 % (9) son profesores de enseñanza primaria y secundaria, 8'5 % nobles sin profesión definida, 6'8% son personas incluidas en el clero y sin otra profesión definida, geólogos (6'8%), archiveros y bibliotecarios (5'1%), arquitectos (5'1%), abogados (3'4%), ingenieros (3'4%), y otros (pintor, militar, farmacéutico y oficial telegrafista), con un 1'7 % cada uno<sup>2730</sup>.

#### *- Autorización a los investigadores extranjeros.*

La autorización a los investigadores extranjeros serían reguladas por el nuevo ordenamiento. Un ejemplo significativo puede ser la **Real orden de 17 de octubre de 1914** autorizando a D. Enrique Breuil, como Catedrático y en nombre del Instituto de Paleontología Humana de París, para practicar excavaciones arqueológicas, en virtud de que los artículos 7º y 14º de la Ley de 7 de julio de 1911 y Reglamento de 1º de marzo de 1912, por lo que determinan que investigadores extranjeros podrían obtener autorización para practicar excavaciones en terrenos públicos y particulares bajo la inspección del Estado. En dicha disposición se perfilaban las obligaciones que debían de cumplir dichos investigadores, entre los que se encontraban: *Los objetos duplicados que encuentre en las excavaciones o exploraciones serían de la propiedad del investigador, la cual reconoce el Estado, con arreglo a los artículos 8º y 10º de la Ley y del Reglamento, y en cuanto a los no duplicados quedarán de propiedad del Estado y a disposición del Excmo. Señor Ministro, quien, respecto a la clasificación de los duplicados, le encargará al personal técnico que para funciones similares determinan la Ley y el Reglamento, y en cuanto a los no duplicados decidirá donde deberán conservarse, así como acerca de las garantías a exigir cuando se pretenda por los descubridores sacar objetos de España.*

<sup>2730</sup> DIAZ ANDREU, M. Nación e internalización. La arqueología en España en las tres primeras décadas del siglo XX, en M.DIAZ ANDREU, y G. MORA (eds.), *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*, Málaga, 1997, p.408.

**- Autorización de excavaciones arqueológicas en fondos privados del propio investigador.**

Si las excavaciones se hicieran en terrenos de los particulares debía de amoldarse al artículo 14 del Reglamento. De esta manera por Real orden de 31 de octubre de 1914 sería autorizada a Doña Mercedes del Prado y Benavides realizar excavaciones arqueológicas en su propia finca que dice ser de su propiedad, titulada Calar del Molino de los Alamos, en el sitio denominado Magón, término municipal de Villacarrillo, provincia de Jaén, nombrándose al mismo tiempo un Inspector para que se inspeccionara el transcurso de las investigaciones: *Que nombrado D. Ignacio Calvo por Real orden de 12 de febrero último Delegado-Director por cuenta del Estado para dirigir exploraciones y excavaciones arqueológicas en diferentes yacimientos de Castellar de Santisteban y Villacarrillo, inspeccionen las que se hagan en la indicada finca de Calar del Molino (2º) y que se comprometiera al cumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el reglamento citados (3º).*

**- Autorización a las Corporaciones Públicas.**

Las Corporaciones Públicas serían autorizadas a realizar excavaciones arqueológicas según **los artículos 7º de la Ley de julio de 1911 y 13 del Reglamento de 1º de marzo de 1912**, que prescribían que el Estado podía otorgar autorización a las Corporaciones oficiales de la Nación para hacer excavaciones en terrenos públicos y privado sin gravamen alguno sobre lo que se descubriese, siempre que los objetos hallados se conserven expuestos al público decorosamente, y que los descubrimientos que puedan hacerse practicando excavaciones, como así sería dispuesto en la **Real orden de 7 de diciembre de 1915** por el que se autoriza promovido por D. Manuel Caballos, como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Córdoba, para practicar excavaciones arqueológicas en la Necrópolis prerromana y romana. Se dispondría además que con cargo al capítulo 20, artículo 2º, concepto 5º del presupuesto vigente, se libre a nombre de D. Manuel Caballos, como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carmona, y a justificar, la suma de 4.000 pesetas para gastos de excavaciones en la Necrópolis de Carmona, de excepcional importancia para los estudios históricos y arqueológicos patrios (2º); Que los objetos que se encuentren mientras las excavaciones se hagan con la subvención del Estado, pasen a formar parte del museo local de Carmona como de propiedad del Estado y en calidad de depósito (3º)

**- Nombramiento de un Delegado Inspector Técnico para que inspeccione y asesore las excavaciones arqueológicas.**

Se podía solicitar el nombramiento de un Delegado Inspector Técnico para que inspeccione y asesore al exponente en la práctica de las exploraciones y excavaciones que viene practicando con autorización, como fue el caso a raíz de la Real orden de 30 de junio de 1914 por el que Don Manuel Ángel pide se nombre un Delegado Inspector Técnico para que inspeccione y asesore al exponente en la práctica de las exploraciones y excavaciones que viene practicando con autorización

*en el Monte El Tecla. En el Informe de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades se precisaba la autorización que tenía Don Manuel Ángel está para practicar exploraciones y excavaciones arqueológicas en el monte El Tecla, término municipal de la Guarda (Pontevedra); Que dichas exploraciones y excavaciones iniciadas ya, parece tienen importancia, pues se han hallado restos de construcciones circulares que hacen recordar las Citanias portuguesas, multitud de fragmentos de cerámica primitiva y romana y varios bronce, entre ellos una físcula y una hoja de puñal señalándose la existencia de un Castro; Que por todo lo expuesto y en bien de la cultura patria, no ve la Junta inconveniente en que por V.E. se acceda a lo solicitado y nombre un Delegado que inspeccione y asesore al Sr. Don Manuel Ángel en las referidas excavaciones. El Delegado Inspector de las Excavaciones sería nombrado por la propia Junta de Excavaciones, en este caso recayendo a favor de D. Ignacio Calvo y Sincher, individuo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, adscrito al Museo Arqueológico Nacional. Curiosamente los gastos que ocasionase la inspección serían de cargo del interesado D. Manuel Ángel, previa su conformidad; y en el caso de que fuera llevada a cabo la inspección solicitada, el nombrado para practicarla deberá informar a esta Junta acerca de su cometido y del plan a seguir en las excavaciones.*

***- Autorización de cesiones de excavaciones arqueológicas a investigadores por renuncia del que había sido a su vez autorizado.***

En algunas ocasiones se autorizaba la cesión de las excavaciones arqueológicas a otros individuos u Corporaciones de aquellos que anteriormente habían sido a su vez autorizada para realizarlo, como fue el caso de las excavaciones que se estaban realizando en la Cueva de la Paloma, en Soto de Regueras (Oviedo). De hecho por Real orden de 31 de octubre se autorizaría al Marqués de Cerralbo a proseguir las excavaciones insertándose un interesante fundamento jurídico a la hora de autorizar la cesión, del que podríamos resaltar 1º) El ser cedido a una institución o Corporación Pública: *Considerando que tratándose de una cesión que hace el solicitante de los derechos que ostenta para excavar en el sitio referido en favor del Marqués de Cerralbo como Presidente de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, es indudable que debe autorizarse la cesión indicada, puesto que no existe disposición legal alguna que se oponga a acceder a tal petición, no hay ningún perjuicio para los intereses del Estado;* 2º) El hecho de que estaba garantizado al ser una entidad oficial del carácter de la que se trata, que se practicarían excavaciones arqueológicas del modo científico adecuado; 3º) Que la concesión a favor del Marqués de Cerralbo, en la representación que ostentaba, debía hacerse quedando la entidad cesionaria comprometida a cumplir las obligaciones que tanto la Ley de 7 de julio de 1911 como el Reglamento dictado para su ejecución en 1º de marzo de 1912, señalar a los particulares y Sociedades a quienes se otorga autorización para hacer excavaciones, y, por tanto, dicha Corporación viene obligada, caso de que D. Gabriel Flórez no se hubiere concertado con los dueños de los terrenos al efecto ni haya procedido al expediente de utilidad pública al indemnizado a aquellos a cumplir este requisito, abonándoles la indemnización correspondiente.

***- Autorización de excavaciones arqueológicas en fondos privados del propio investigador.***

De esta manera por Real orden de 31 de octubre de 1914 sería autorizada a Doña Mercedes del Prado y Benavides realizar excavaciones arqueológicas en su propia finca que dice ser de su propiedad, titulada Calar del Molino de los Alamos, en el sitio denominado Magón, término municipal de Villacarrillo, provincia de Jaén (1º), nombrándose al mismo tiempo un Inspector para que se inspeccionara el transcurso de las investigaciones: *Que nombrado D. Ignacio Calvo por Real orden de 12 de febrero último Delegado-Director por cuenta del Estado para dirigir exploraciones y excavaciones arqueológicas en diferentes yacimientos de Castellar de Santisteban y Villacarrillo, inspeccionen las que se hagan en la indicada finca de Calar del Molino (2º) y que se comprometiera al cumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el reglamento citados (3º).*

***- Las obligaciones de los concesionarios de excavaciones arqueológicas.***

Como constaba en todas las disposiciones legales en que se autorizaba la excavación, el investigador autorizado debía atenerse al cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de 7 de julio de 1911, el Reglamento de 1º de marzo de 1912 y demás disposiciones. El concesionario Sr. Mateos se obliga al cumplimiento de las prescripciones de la Ley y Reglamento vigentes en la materia de excavaciones, especialmente en lo que se refiere a la inspección del Estado, a practicar los trabajos de un modo científico adecuado y a redactar la oportuna Memoria, que entregará en el próximo mes de enero, en la que se dará cuenta a la Junta Superior de Excavaciones de los trabajos y descubrimientos realizados e inventariará los objetos hallados (3º). La obligación de presentar una Memoria anual de excavaciones se convierte en un instrumento vital de tutela pública del Patrimonio Arqueológico, acorde con los métodos científicos que se estaban introduciendo en la práctica arqueológica de carácter científico en España. La instancia redactada por el arqueólogo responsable sería presentada a la Junta Superior de Excavaciones, en el que se incluían los resultados obtenidos en la excavación arqueológica, describiéndose todas las excavaciones efectuadas y todos los objetos encontrados. En caso de que estimase favorable sería autorizada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que sería promulgada por Real Orden, se dispondrían en Real orden de 20 de agosto de 1912 por lo que se aprueba la Memoria presentada por D. Narciso Sentenach relativa a las excavaciones efectuadas bajo su dirección en el año 1911 en las ruinas de Termes, la Real orden de 11 de marzo de 1914 aprobando la Memoria presentada por José Ramón Mélida, Director de las excavaciones de Mérida en el año próximo pasado, la Real orden de 11 de marzo de 1914 aprobando la Memoria presentada por Don Ignacio Calvo y Sánchez, nombrado por este Ministerio, Director de las excavaciones en Termes en 1913, la Real orden de 11 de marzo de 1914 aprobando la Memoria

presentada por D. Narciso Santonech y Cabañas, referente a las exploraciones llevadas a cabo de la antigua Clunia. Incluso se establecía como obligatoria la práctica de la excavación con una metodología científica, que en caso de no hacerlo sería retirada la concesión por parte del propio Estado (art.14.1 del Reglamento). Como podemos apreciar en el recuadro la mayor parte de las autorizaciones recaerían al personal investigador cualificado, como fueron los casos de Enrique Aguilera y Camboa, Marqués de Cerralbo, Enrique Breuil, Catedrático, Juan Cabré Agulló, Comisario de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Ventura Fernández y López, Profesor del Instituto de Figueras, etc. La instancia, croquis y fotografías que forman el expediente serán devueltos para el Archivo de la Junta Superior de Excavaciones, donde, debidamente protocolizado su consulta puede ser útil (4º).

La denegación del permiso de excavación arqueológica en el Monasterio de Poblet a raíz de una Real Orden denegando a José Villafranca el permiso para efectuar excavaciones en los terrenos del monasterio de Poblet puede ser un buen ejemplo de la potestad que el Estado va a ir asumiendo como árbitro de las excavaciones en estos años. La autorización pedida por el solicitante tendría como objeto *buscar joyas, manuscritos y numerario enterrado en lugar de él conocido*, siendo denegada siguiendo tanto de los informes de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, que notificaría que *procedía denegar tal autorización por tratarse de objetos arqueológicos sino de joyas y numerarios y no acompañar el croquis del terreno que las disposiciones vigentes determinen*, como de la propia Comisión de Monumentos de Tarragona en la que exponía que estaba prohibido terminantemente *la busca de supuestos tesoros escondidos en el Monasterio, impidiéndose en lo sucesivo en toda nueva profanación*, a los que se unirían los informes negativos de las Academias de San Fernando y de la de la Historia. A ello se uniría el hecho de que el solicitante no perseguía en su excavación ningún *fin científico alguno y si solo utilitario*, ni había determinado el lugar exacto donde había de verificarse la excavación, por lo que se ignoraba si al realizarse podía consignar perjuicios al Monumento así como no constaba la extensión que debía de abordar.

**- Respeto del dominio particular donde se iba a realizar la excavación arqueológica.**

No bastaba la autorización del Estado sino que debían de contar con la autorización de los propietarios de los fundos privados donde se iban a realizar las excavaciones, por lo que quedaba salvaguardado el derecho de la propiedad privada. Para ello, como así dispondría el artículo 14.2 del Reglamento, debían de promover el expediente referente al artículo 4.1 de la Ley y 8º del Reglamento. En **la Real Orden de 20 de noviembre de 1914** por el que se autoriza a Juan Cabré Agulló, Comisario de la Comisión de Investigaciones



Paleontológicas y Prehistóricas, para realizar excavaciones arqueológicas en la Cueva de las Pardinas de Santa Elena (Jaén): Considerando que no obstante la manifestación que consigna al solicitante de que las excavaciones arqueológicas que proyecta efectuar se hará en terrenos del Estado, si a más de en ellos hubiese de practicarlas en terrenos particulares, se amoldará a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912, dictado para la aplicación de la Ley, en el que se ordena que para dicho caso los que soliciten la autorización promoverán precisamente, a no estar previamente concertados con los dueños de los terrenos, el expediente a que se refiere el artículo 4º, párrafo primero de la ley, e indemnizará al propietario de los daños y perjuicios que la excavación ocasione en su finca, según tasación legal. La propia Asesoría Jurídica ratificaría *Que en caso de practicarse alguna excavación en terrenos particulares en cumplimiento de lo establecido en los preceptos legales citados, deberá el solicitante en los preceptos legales citados, deberá el solicitante estar previamente concertado con el propietario de aquéllos, y promoverá el expediente de utilidad pública o le indemnizará de los daños y perjuicios que sufrieron en la forma establecida por las disposiciones de referencia (art.2).*

**5.3.4. La potestad del Estado en realizar excavaciones en dominio privado: El expediente de utilidad pública conforme a la ley de 1911 de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Estado.**

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 8º del Reglamento de 1º de marzo de 1912, el Estado se reserva el derecho de excavar en propiedades particulares. En el artículo 8º del Reglamento se establecería el derecho del Estado a hacer excavaciones en propiedades particulares, convirtiéndose en uno de los pilares más progresista de la nueva legislación, ya que se estaba acometiendo la intervención en la propiedad privada, alegándose la utilidad pública, aunque se indemnizaría al propietario de los daños y perjuicios de la excavación, tras una tasación: *El Estado reserva el derecho de hacer excavaciones en propiedades particulares, ya adquiriéndolas por expediente de utilidad pública, ya indemnizando al propietario de los daños y perjuicios que la excavación ocasione en su finca, según tasación legal.*

**- La Real orden de 15 de febrero de 1923 por el que se dispone que por cuenta del Estado se practiquen excavaciones arqueológicas en la loma de “La Alcudia”, en Elche (Alicante).**

De esta manera sería promulgado la **Real orden de 15 de febrero de 1923** por el que se disponía que por cuenta del Estado se practicasen excavaciones arqueológicas en la loma de “La Alcudia”, en Elche (Alicante), vista la moción elevada a este Ministerio por el Presidente de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, de conformación con la referida propuesta que en la referida Junta formuló el vocal de la misma D. Manuel Gómez Moreno, en el sitio de la loma de “La Alcudia”, en Elche

(Alicante), donde se halló en 1897 el célebre busto de piedra caliza conocido con el nombre de la Dama de Elche. Se dispondría 1º) Que fuese declarado que el Estado se reservase el derecho de practicar excavaciones arqueológicas en el sitio denominado “La Alcudia” en Elche (Alicante), emplazamiento que ocupó la ciudad de Illigi; 2º) Que la solicitud de la Junta Superior de Excavaciones así como la autorización que se concede, se inscribiera en el libro-registro de la Junta, para acreditar el primordial derecho del Estado para practicar excavaciones en el indicado sitio; 3º) Que la Junta Superior de Excavaciones propusiera al Ministerio de Instrucción Pública el Delegado-Director que debería dirigir los trabajos, así como la subvención necesaria para llevarlos a cabo; 4º) Una vez hecha la concesión de excavar a favor del Estado, quedaría sujeto a responsabilidad, indemnización y pérdida de las antigüedades descubiertas los que practiquen excavaciones en dicho punto de la Alcudia, según preceptúan los artículos 10 y 22 de la Ley y Reglamento citados anteriormente y 5º) De esta Real Orden se daría traslado al Gobernador Civil de Alicante, al Alcalde de Elche, para que dieran conocimientos de ello a los interesados, y a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. La adquisición de las ruinas y antigüedades encontradas bajo tierra o en el suelo: *Las ruinas, ya se encuentren bajo tierra o sobre el suelo, así como las antigüedades utilizadas como material de construcción en cualquier clase de obras, podrán pasar a propiedad del Estado mediante expediente de utilidad pública y previa la correspondiente indemnización al dueño del terreno y al explorador, si existiere* (art.4 de la Ley.) En el expediente se insertaba la valoración, y se tenía en cuenta los antecedentes de las exploraciones y el valor relativo del objeto, que estime una comisión compuesta por académicos de la Historia y de Bellas Artes, añadiendo el de Ciencias, si hubiese restos paleontológicos, que serán designados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

**- La Declaración de utilidad pública de las excavaciones realizadas en Punta de Vaca (Cádiz) por la Real Orden de 30 de abril de 1914.**

El sarcófago masculino se descubrió de manera casual, como consecuencia de los desmontes realizados en Punta de Vaca en Cádiz, en 1887. El 10 de marzo serían descubiertos los dos primeros hipogeos, conteniendo uno de ellos un esqueleto de hombre, y el 30 de mayo apareció el tercer hipogeo, el más importante de todos por contener el sarcófago. Pelayo Quintero Atauri publicaría en 1912 un artículo titulado *Antigüedades de Punta Vaca* en la Guía de Cádiz, dejando constancia del valor de los bienes arqueológicos encontrados. La Comisión Provincial de Cádiz enviaría un Oficio en el que se solicitaba a la Real Academia de la Historia que pidiera al Gobierno que los descubrimientos de la necrópolis de Punta Vaca fueran declarados de utilidad pública con el fin de que puedan continuarse las excavaciones, debido a la importancia que para la historia primitiva pudieron apreciar el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública, y los Sres. Académicos de Número, en su visita a dichos

*lugares.* En el Informe de la Real Academia del 30 de junio de 1913 de la Historia se solicitaba que fuese Declarado de utilidad pública conforme a la ley de 1911 las excavaciones que estaba llevando a cabo Pelayo Quintano en la necrópolis fenicia de la Punta de Vaca en Cádiz. El fundamento que sostenía tal pretensión recaía sobre la importancia de las antigüedades halladas en la misma: *Entre las antigüedades halladas en España que más llaman la atención del arqueólogo están las que vienen descubriéndose desde 1887 en diversos sitios de Cádiz y especialmente en los terrenos comprendidos entre la fortificación y la llamada Punta de la Vaca o Astilleros de Veá-Murgia, son de arte fenicio y al mismo corresponde el sarcófago antropoide único en nuestra Patria y gran número de joyas todo ello encontrado en sepulturas que forman verdaderos hipojeos, monumentos y objetos de suma importancia para la historia patria, para el Arte y la arqueología.* A pesar de la importancia de las antigüedades descubiertas, la actitud negativa de los propietarios a que continuase las excavaciones Don Pelayo Quintero y Atauri, nombrado Delegado Inspector de las mismas por R.O. de 30 de abril, y el hecho de que *al visitar las tumbas descubiertas halló que fraudulentamente y burlando la vigilancia encomendada a los agentes de la autoridad habían sido medio destruidas y saqueadas dos sepulturas, hecho que denunció al juzgado,* la Real Academia de la Historia recomendaría *con el objeto de evitar el grave perjuicio de tales desmanes impropios de gentes cultas causan a los estudios arqueológicos* proceder a la aplicación del art.4º de la Ley de 7 de julio de 1911 en su relación con los 8º al 12º del Reglamento de 1º de marzo de 1912 sobre Excavaciones y Antigüedades.

De esta manera la Junta de Excavaciones solicitaba 1º) Que se dictase la oportuna R.O. en la que se declarase de utilidad pública las excavaciones que se estaban realizando en los terrenos denominados Punta de la Vaca en la ciudad de Cádiz, donde habían sido halladas tumbas y objetos de arte fenicio de gran importancia para nuestra historia y para la arqueología (art.4º de la Ley y 3º del Reglamento); 2º) Que Don Pelayo Quintero y Atauri nombrado por R.O. de 30 de abril último, Delegado Inspector de dichas excavaciones señalase los terrenos que debían ser adquiridos por el Estado para que pueda proseguirlas y represente a éste en los casos necesarios; 3º) Que a los efectos de la valoración de los terrenos que debían adquirirse y de conformidad con lo que determinase la Ley de 7 de julio de 1911 en su artículo 4º, párrafo 2º y el Reglamento de 1º de marzo de 1912 en sus artículos 9º al 12º y 31 párrafo 2º, se efectuase la tasación, por los Académicos correspondientes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Don Pedro Mayoral, Director de la de Cádiz y a Don José Romero Barrero, Arquitecto Provincial y Secretario de la Comisión de esta Ciudad, quedando facultado el propietario del terreno para que designase un tercero que había de ser también académico. Una vez hecha la tasación debía de ser aprobada por Real Orden; 4º) Que como el pago de los terrenos que adquiriera no podía hacerlo con cargo a los Presupuestos vigentes por estar a fin de ejercicio, se aceptase el ofrecimiento que hacía Pelayo

Quintero y Atauri de efectuarlo con las sumas que obraban en su poder y las que pudiera obtener de Centros y particulares y 5º) Que cualquiera que fuera la forma de pago, tanto los terrenos como los objetos hallados y que se hallasen serían propiedad del Estado. Como podemos comprobar se ponía en marcha un verdadero procedimiento administrativo en el que quedaba de manifiesto una concepción de dominio público de los bienes arqueológicos, y al mismo tiempo los problemas que conllevaba su adquisición, como eran los problemas presupuestarios, el modelo de tasación y la reticencia de los propios propietarios privados siempre reaccionaban a hacer cualquier excavación en su territorio particular, que es lo que llevaba a la declaración de utilidad pública. Al final del Informe aparecía una verdadera declaración de intenciones, donde se intentaba paliar un supuesto caso de indefensión del propietario, para lo que se declaraba de utilidad pública la intervención del Estado y se precisaban con garantías las tasaciones que había que efectuarse: *No se oculta á esta Junta la innovación de trámite en lo que propone; pero entiende que a la nueva ley de 7 de julio de 1911 deben someterse todos los casos en que haya expropiación de terrenos para excavaciones o de antigüedades, pues si el espíritu de aquella ley especial es muy otro del que informa la ley de expropiación forzosa de 10 de enero de 1879, debiendo tener presente V.E. que en lo que en este caso resuelva será norma para los muchos que han de presentarse, estimando que el propietario queda garantizado con la previa R.O. de declaración de utilidad pública y el nombramiento de uno de los peritos que intervienen en la tasación.*

Por fin sería promulgada **la Real Orden de 30 de abril de 1914** sería declarada de utilidad pública las excavaciones llevadas a cabo en los terrenos conocidos con el nombre de Punta de la Vaca (Cádiz). El procedimiento administrativo seguido para ser declarado de utilidad pública aparecía en la citada disposición, por el que en virtud de la Real Orden fecha 22 de diciembre de 1913 expedida por el Ministerio de Instrucción Pública, el Consejo de Estado examinaría el adjunto expediente, del cual resultaría:

1º) El informe del Correspondiente de la Real Academia de la Historia en Cádiz: *Que en 7 de diciembre de 1912, el Director de la Real Academia de la Historia había manifestado que su correspondiente en Cádiz, D. Pelayo Quintero, había comunicado que en los terrenos conocidos con el nombre de Punta de la Vaca, extramuros de aquella capital, habían sido descubiertos ciertos enterramientos de carácter ibérico-fenicios, cuya importancia para la Historia primitiva de nuestra Península es innegable;*

2º) Visita de la Real Academia de la Historia a los terrenos que se habían excavados para inspeccionar in situ el lugar: *Que en su vista la Academia, en sesión del 6 del mismo mes y año, había acordado interesar que dichos descubrimientos fueran declaradas de utilidad pública, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Excavaciones de 7 de julio de 1911, al efecto de poder*

*continuar los trabajos, suspendidos por las dificultades sistemáticas opuestas por el usufructuario de la finca colindante, y en cuyo subsuelo han de continuarse los trabajos;*

3º) Nombramiento de Delegado-Director de las excavaciones a Pelayo Quintero: *Que instruido el oportuno expediente, se remitió a la Junta Superior de Excavaciones, la cual, teniendo en cuenta lo expuesto, y de conformidad con lo preceptuado en los arts. 31 y 40 del Reglamento de 1º de marzo de 1912, y lo solicitado por D. Pelayo Quintero, propuso que se nombrara a éste Delegado-Director de las expresadas excavaciones, que los gastos que ocasionaran éstas se sufragaran con los fondos que con dicho objeto obraban en poder de dicho señor, y las que más adelante pudiera obtener de Centros y particulares;*

4º) Adquisición por el Estado de los bienes encontrados en las excavaciones: *Que los objetos encontrados y los que en adelante aparecieren en las referidas excavaciones fueran propiedad del Estado, debiendo determinar el Ministerio donde habrán de ser expuestos y conservados, y que se manifestara al Sr. Quintero la gratitud que merecía su celo en bien de la cultura (...).*

5º) Proposición de declaración de utilidad pública por no haber llegado a un acuerdo con los dueños de los terrenos: *Que en vista de ello, procedía la aplicación del art.4 de la Ley de 7 de julio de 1911, en su relación con los 3º al 12 del Reglamento de 1º de marzo de 1912, sobre Excavaciones y antigüedades, y proponía que se dictara la oportuna Real orden declarando de utilidad pública las excavaciones que se han practicado y se practiquen en los mencionados terrenos;*

6º) Informe de Pelayo Quintero sobre los terrenos que debían de ser adquiridos para proseguir las excavaciones: *Que D. Pelayo Quintero y Atauri, Delegado Inspector de dichas excavaciones, señalaría los terrenos que debían ser adquiridos para que pudieran proseguir aquéllas y represente a éste en los casos en que sea necesario, que a los efectos de la valoración de los terrenos, de conformidad con lo que determina la ley de 7 de julio citado en su art.1º, y en el Reglamento mencionado, art. 9º al 12 y 31 (párrafo 2º), y estimando no sea de importancia la tasación, nombra para que la lleven a cabo a las Academias que cita, y a D. José Romero Herrero, Arquitecto provincial y Secretario de la Comisión de Monumentos de la ciudad de Cádiz, quedando facultado el propietario del terreno para designar un tercero, que deberá ser también académico, debiendo la tasación ser aprobada por el Ministerio;*

7º) Aceptación de la propuesta de asignación presupuestaria por parte del Delegado: *Que no siendo fácil hacer el pago de los terrenos con cargo a*



*los presupuestos vigentes por estar a fin de ejercicio, se acepte el ofrecimiento que hace el Delegado especial de efectuarlo con las sumas que obran en su poder y las que pueda obtener de Centros y particulares, y que cualquiera que sea la forma de pago tanto los terrenos como los objetos hallados y que se hallen, serán propiedad del Estado, entendiendo que a la nueva ley de 7 de julio de 1911 deben someterse todos los casos en que haya expropiación de terrenos para excavaciones o de antigüedades, pues el espíritu de aquella ley especial es muy otro del que informa la ley de Expropiación forzosa, debiendo tener presente que lo que se resuelva habrá de servir de norma para los muchos casos análogos que han de presentarse;*

8º) Seguir los trámites de tasación por la ley de 10 de enero de 1879: *Que el Negociado y Sección correspondiente del Ministerio de Instrucción Pública, teniendo en cuenta la importancia del asunto, cuya resolución ha de servir de precedente por constituir el primer caso de declaración de utilidad pública de unas excavaciones, desde que rige la ley de 7 de julio y el Reglamento de 1º de marzo de 1912, y que lo mismo dicha ley en su art.4º que el Reglamento en los 9º, 10 y 11, se refieren al valor relativo de las excavaciones en lo que ha de adquirir el Estado en interés de la cultura nacional y del buen nombre de la Nación, cuyo valor habrá de estimarse en cada caso por una Comisión compuesta de tres Académicos de Historia, Bellas Artes y de Ciencias, o sea a uno de los datos que se precisan para la tasación total del inmueble, debiendo acaso en vista de este dato, una vez conocido, seguirse para la expropiación los trámites de la ley de 10 de enero de 1879, máxime cuando todo inmueble a expropiar ha de llevarse a efecto un justiprecio, para el cual carecen de competencia los Académicos mencionados en concepto de historiólogos, arqueólogos o naturalistas, acerca del valor en sí de la finca, fuera de su aspecto arqueológico, propone que, sin perjuicio de que D. Pelayo Quintero determine cuáles sean los terrenos a expropiar por virtud de la declaración de utilidad pública de las excavaciones, se oiga la opinión de la Asesoría jurídica, incluso acerca de si debe someterse además el expediente a consulta del Consejo de Estado*

9º) Informe de la Asesoría Jurídica sobre la expropiación de los terrenos a realizar: *Que la Asesoría jurídica del Ministerio de Instrucción Pública informa que procede aplicar la Ley de Expropiación forzosa por causa de utilidad pública y disposiciones concordantes, a los expedientes a que se refiere la ley de Excavaciones para hacer efectivos los derechos que en la misma se reconocen al Estado, debiendo al efecto dictarse una Real orden de carácter general en que así se determine, pudiéndose oír también el informe del Consejo de Estado; extremo este último con el que se muestra conforme la Subsecretaría de Instrucción Pública.*

A continuación se consideraba la cuestión del derecho de la propiedad privada que quedaba en cierta manera limitado por una intervención del Estado en relación a un caso de declaración de utilidad pública, primando el interés general de los bienes que debían de ser conservados sobre los intereses privados de los terrenos. De esta manera se fundamentaba su aplicación por un caso excepcional, que era continuar las excavaciones arqueológicas, subrayando que *no teniendo más interés el Estado que el de hacer unas excavaciones con objeto de realizar descubrimientos arqueológicos, no necesita adquirir definitivamente los terrenos de que se trata, porque le serían totalmente inútiles una vez terminada aquéllas, de donde se deduce que procede aplicar el título 3º de la citada ley de Expropiación, cuyo artículo 55 establece que: La Administración, así como las Corporaciones o personas hayan subrogado sus derechos, podrán ocupar totalmente los terrenos de propiedad particular en caso de extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de obras de utilidad pública, ya se hallen diseminadas por la propiedad o hayan de ser objeto de una explotación formalmente organizada; y Considerando (...) que aplicando las disposiciones de dicho título 3º no se perjudican los intereses del propietario de los terrenos, puesto que previa valoración habrá de abonársele la indemnización que corresponda por el tiempo que la ocupación dure, y se favorecen, además, notoriamente los del Estado por la mayor brevedad del procedimiento y porque no se vea obligado a adquirir con carácter dominical terrenos que una vez hechas las excavaciones científicas de que se trata, no habrían de producirle utilidad alguna*, dejando a salvo la posibilidad de una reposición de dominio de aquellos terrenos a sus dueños. De esta manera los terrenos pasarían a ser adquiridos por declaración de utilidad pública en concordancia con la ley general de Expropiación forzosa de 10 de enero de 1879, dejando claro que sería una ocupación temporal de los terrenos que al efecto determine D. Pelayo Quintero Atauri, Delegado-Director de las mismas a cuenta y riesgo de ésta, y que pasarían a ser propiedad del Estado los objetos descubiertos y que se descubran para su ingreso en el Museo Arqueológico de Cádiz.

***- Las excavaciones de la Necrópolis Púnica de Ebusus: Una nueva aplicación de declaración de utilidad pública sobre excavaciones arqueológicas en base a la ley de 30 de abril de 1914.***

Los descubrimientos arqueológicos en la Necrópolis Púnica de Ebusus o Ereso, que existe cerca de Ibiza, en el lugar conocido por Puig des Mulins, llevaría a una nueva aplicación de la declaración de utilidad pública por el que serían expropiados aquellos terrenos que fueron considerados excepcionales para proseguir las correspondientes excavaciones. El expediente sería incoado por D. Antonio Vives y Escudero y el Patronato del Museo Arqueológico de Ibiza, por lo que la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, en vista del informe emitido por el catedrático D. Manuel Cazorro y Ruíz, como Delegado Director de dichas excavaciones, previa visita de inspección que el último realizó a las mismas, propondría al Ministerio de Instrucción Pública que 1º) Fuese declarado Monumento Nacional la necrópolis, quedando bajo la

protección del Estado e inmediata inspección de la Comisión provincial de Monumentos Históricos Artísticos; 2º). Que se incoase el expediente de utilidad pública que determina el artículo 4º de la Ley de 7 de junio de 1911 y los 8º y 9º del Reglamento de 1º de marzo de 1912, vigentes en la materia y 3º) Que mientras se transmitan los expedientes que se incoen se suspendan las excavaciones legítimas o fraudulentas que allí puedan practicarse. De esta manera se dispondría por **Real Orden de 23 de mayo de 1914** que fuesen declarados de utilidad pública las excavaciones llevadas a cabo en la Necrópolis Púnica de Ebusus o Ereso, que existe cerca de Ibiza, en el lugar conocido por Puig des Mulins. Nuevamente se pondría como horizonte la ocupación temporal de aquellos terrenos que se consideraban necesarios para proseguir las pertinentes excavaciones arqueológicas: *Considerando que sin perjuicio de llegarse en su día, si preciso fuera, a la declaración de monumento nacional respecto de dicha Necrópolis, basta hacer por ahora la de utilidad pública, a tenor de los textos citados, con la ocupación temporal subsiguiente prevista en el título III de la Ley de Expropiación Forzosa de 10 de enero de 1879, cuyo artículo 55 establece que la Administración, así como las Corporaciones o personas en quienes hayan subrogado sus derechos, podrán ocupar temporalmente los terrenos de propiedad particular en el caso de extracción de materiales de toda clase necesario para la ejecución de obras de utilidad pública que se hallen diseminados por la propiedad o hayan de ser objetos de una explotación formalmente organizada, y no la expropiación definitiva, ya que una vez cumplido con los objetivos pertinentes la adquisición definitiva por el Estado de los terrenos en que la Necrópolis está enclavada produciría las consecuencias de que le fueran totalmente inútiles una vez terminadas las excavaciones, y en cambio la ocupación temporal no perjudicaría ningún derecho de propiedad o de excavación, puesto que aquellas personas o entidades que las ostente habrán de ser indemnizadas en forma legal.* Nuevamente se estaba buscando una salida jurídica al conflicto que las expropiaciones de terrenos particulares para excavaciones arqueológicas generaban, por lo que se regulaba al mismo tiempo la ocupación temporal de los terrenos, con la consiguiente indemnizaciones a que haya lugar por el título III de la ley de Expropiación forzosa, en relación con la de Excavaciones y Antigüedades, por lo quedaba a salvo el derecho del propietario y la adquisición en propiedad del Estado, con el objeto de que fueran ingresado en el Museo Arqueológico de Ibiza aquellos objetos que fueran descubiertos, dejando a salvo el interés general (art.1).

**- La Declaración de utilidad pública para llevar a cabo las excavaciones arqueológicas en Medina Azahara: La Real orden de 2 de diciembre de 1914.**

Las primeras intervenciones en Medina Al Zahara se iniciarían en 1854 cuando el Ministerio de Fomento comisionó a Pedro de Madrazo y Pascual de Gayangos para realizar una pequeña exploración, a fin de comprobar si había o no una edificación soterrada. Sin embargo, la operación fue frustrada. No es hasta 1911 cuando se inician las primeras excavaciones arqueológicas dirigida

por R. Velázquez Bosco que ya era arquitecto conservador de la mezquita de Córdoba. Los problemas con los propietarios de los terrenos, llegando incluso a paralizar temporalmente las obras, hecho que movería a Velázquez a proponer al Estado su paulatina adquisición. De esta manera, en 1914 el arquitecto propondría la aplicación del artículo 8º de la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911, solicitando al Ministerio de Instrucción Pública la declaración de utilidad pública de la finca y su ocupación temporal para la excavación. En virtud de la **Real Orden de 2 de diciembre de 1914** sería declarado de utilidad pública las excavaciones que se harán en los terrenos en que estuvo situado Medina Azahara. Al igual que en los casos anteriores, se haría mención en la disposición legal de los problemas que habían ocasionado los propietarios para continuar las excavaciones arqueológicas, por lo que había *sido necesario suspender los trabajos hasta tener nueva concesión de los dueños de los terrenos; que la finca que se precisa para continuar los trabajos están aún proindivisa, y entre los propietarios hay gran diversidad de criterios, existiendo algunos que ponen dificultades y exigencias inadmisibles para la continuación de aquellos, por lo que entiende que debe aplicarse el art.8º de la ley de Excavaciones, como único medio de poder llegar a una resolución justa*, siguiendo el Informe de D. Ricardo Velázquez, Delegado-Director de los trabajos de excavación. En el Informe de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, del 2 del diciembre de 1914, propondría: 1º) Que dada la importancia que para el Arte, la Arqueología y la Historia patrias tienen las excavaciones que vienen practicándose en los terrenos de que se trata, fuesen declarados los terrenos de utilidad pública; 2º) Que la ocupación temporal para la práctica de dichas excavaciones, deberá regularse en cuanto a las indemnizaciones a lo que previene el art.4º de la ley de 7 de julio de 1911 y el título 3º de la ley de Expropiación Forzosa de 10 de enero de 1870 y disposiciones ministeriales de 30 de abril y 23 de mayo de 1914, por lo que nuevamente no se trataba de una expropiación definitiva del territorio y 3º) Que los objetos que se hallasen pasasen al Museo Arqueológico de Córdoba, o por lo menos los duplicados. El Informe del Negociado Jurídico fundamentaría la ocupación en el artículo 4º de la ley, por el que el Estado se reservaba el derecho de hacer excavaciones en propiedades particulares, ya adquiriéndolas por expediente de utilidad pública, ya indemnizando al propietario de los daños y perjuicios que la excavación ocasione en su finca, según tasación legal, y por tanto, aplicando este precepto, procede que sin perjuicio de que por el solicitante se adquieran los terrenos precisos para continuar las excavaciones de que se trata (en aquellos caso en que sean factible) mediante la indemnización al propietario de los daños y perjuicios que las excavaciones ocasionen. En consecuencia, se dispondría 1º) Que se declarasen los terrenos de que se trata como de utilidad pública; 2º) Que la ocupación temporal de terrenos para la práctica de dichas excavaciones deberá regularse, en cuanto a las indemnizaciones, a lo que preceptúa el art.4º de la ley de 7 de julio de 1911 y el tít.3º, art.55, de la ley de Expropiación Forzosa; y 3º. Que los objetos que

se hallen sean propiedad del Estado y un ejemplar de los mismos pase al Museo Arqueológico de Córdoba al efecto de cumplir lo prevenido en el art.12 de la ley citada.

Sin embargo, el expediente de compra no se inició hasta 1922, culminando definitivamente en 1926, adquiriendo el Estado las primeras 8 hectáreas de la ciudad califal. El acuerdo con los propietarios incluía no solo el valor del terreno sino también la adquisición de los restos arqueológicos que se encontrase, pues no olvidemos, que de acuerdo con la Ley de 1911 el propietario de los terrenos lo era también de los materiales en él aparecidos y que el Estado había adquirido en 1914 los primeros objetos encontrados en las excavaciones de 1911 por un importe de 10000 pesetas. Como apunta esta quiebra en la protección, derivada en parte de una situación legal concreta definida por esa Ley y en parte por la ausencia de unas mínimas medidas de seguridad, habían provocado una salida importante de materiales procedentes de Córdoba que fueron adquiridos en el mercado de antigüedades por el hispanista inglés Mr. Hilbregh, y donado a su muerte en 1914 al Victoria and Albert Museum, un lote compuesto de 72 fragmentos de ataurique y 9 capiteles de mármol. La declaración de la ciudad de Medina al-Zahra como Monumento Histórico Artístico Nacional por Real Orden de 12 de julio de 1923, incide en el hecho de la necesidad de poner a cubierto aquellos restos de la codicia de especuladores que, apoderándose de ellos por modo clandestino o ilícito, tratan de venderlos a Museos extranjeros<sup>2731</sup>. A la muerte de Velázquez, la Junta de Excavaciones no propone ya a un nuevo arquitecto-director, sino a una Comisión delegado-directora que se haría cargo de los trabajos, nombrada por el Ministerio de Instrucción Pública en 1923. Esta Comisión estaría integrada por Rafael Jiménez (Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos), Rafael Castejón (Académico), Ezequiel Ruíz (Académico), Joaquín Navascués (Director del Museo Arqueológico) y Félix Hernández (Arquitecto), respondiendo al modelo de comisiones honoríficas creadas durante los siglos XIX y XX, que al mismo tiempo hay que señalar que en este caso concreto se denota la importancia que el yacimiento iba adquiriendo para la Administración y la valoración de la complejidad de su tutela. Una comisión semejante ya se había establecido en Numancia desde su inicio en 1906. En virtud de la **Real orden de 12 de julio de 1923 sería declarado Monumento Nacional las ruinas de la ciudad y palacio de Medina Az Zahara (Córdoba)**, vista la propuesta que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ante la idea de evitar que los objetos y restos que se encuentran en las excavaciones que en dicho lugar se practican salgan de España y se vendan a los Museos extranjeros. Se incluía específicamente en la declaración que la Real Academia de la Historia estimaba *que habiéndose practicado excavaciones con fondos*

---

<sup>2731</sup> VALLEJO TRIANO, Antonio *Problemas de gestión y administración de Medina Al-Zahra desde el inicio de su recuperación, Arqueología y territorio medieval*, Universidad de Jaén, 1994, pp.17-19.



*del Estado y adquirido por el mismo buena parte del terreno que dichas ruinas ocupan, su derecho de propiedad es notorio, siendo muy justificada la declaración propuesta, por lo que se ratificaba de este modo el dominio público del yacimiento declarado Monumento Nacional.*

***- El caso de la expropiación forzosa fundamentada en la Ley de 1911 en Numancia, Mérida e Itálica.***

Durante los primeros años del siglo XX prosiguieron las excavaciones arqueológicas en Numancia bajo la instancia del Estado, más por un contenido nacionalista que con un rigor meramente científico<sup>2732</sup>. En 1905, dos investigadores alemanes, el profesor de Historia de la Universidad de Gotinga, Adolfo Shulten, y el otro, Constantino Könen, arqueólogo del Museo de Bonn, habían realizados excavaciones en la antigua ciudad prerromana, por virtud de una subvención del Emperador de Alemania Guillermo II y la autorización oficial respectiva. En el mismo año, la situación cambiaría al hacerse cargo de las excavaciones el propio Estado como así lo refleja las propias Memorias, siéndole asignada una asignación presupuestaria, el nombramiento de una Comisión y la realización de un Plan de Excavaciones: *En 1905, con motivo del calor de la inauguración del Monumento elevado en el Cerro de Garay, nació la idea de que el Gobierno español tomara a su cuidado las excavaciones de Numancia. El mismo Sr. Aceña, como Senador, y el Sr. Vizconde de Eza, como Diputado, tomaron a su cuidado este empeño de la provincia que representaba, y que era al mismo tiempo un vivo deseo nacional. Sus elocuentes palabras, en ambas Cámaras, consiguieron del Señor Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que lo era el Sr. Don Vicente Santa María de Paredes, que se fijara un crédito de 15000 pesetas para los gastos de excavaciones de Numancia en los presupuestos generales del Estado para 1906. En consecuencia, previa propuesta formulada por las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, de las personas que podían formar la Comisión, fueron nombrados individuos de ella, por Real Orden de 1º de mayo del mismo año, los Excmo. Señores D. Eduardo Saavedra y D. Juan Catalina García, Académicos de la Historia; el Ilmo. Sr. D. José Ramón Mélida, Académico de Bellas Artes de San Fernando; los Sres. D. Teodoro Ramírez, D. Mariano Granados y D. Juan José García, Vocales de la Comisión de Monumentos de Soria y D. Manuel Aníbal Álvarez.*

Por **Real Orden de 27 de mayo de 1906** se dispondría el nombramiento de la Comisión compuesta por dos académicos de la Real Academia de la Historia sería encargada de dirigir los trabajos, estudios y excavaciones para el descubrimiento de las ruinas de la ciudad de Numancia, así como de la conservación de las ruinas y de los objetos que se encuentren. En una segunda sesión, del 5 de julio se fijaría un plan de excavaciones, *1º, que por el momento, se circunscribieran los trabajos a terrenos cuyo propietario, Sr. Vizconde de Eza, con el laudable propósito de hacer de ellos donación al Estado, los*

<sup>2732</sup>DE LA TORRE ECHEVÁRRI José Ignacio; JIMENO, Alfredo *Numancia, símbolo e historia*, Akal, 2005; DE LA TORRE ECHEVÁRRI, José Ignacio “Numancia: Usos y abusos de la tradición historiográfica”, *Complutum* 9, 1998, pp.193-211.

*había puesto desde luego a nuestra disposición; 2º, que se comenzara la adquisición a otros propietarios de sus terrenos, puesto que se daba el caso anómalo de estar declarada Monumento Nacional las ruinas de Numancia y no ser propiedad del Estado las tierras en que se hallaban.*<sup>2733</sup>. Se hizo constar que no fuera consentido que ningún investigador ajeno a la misma hiciera excavaciones en aquel sitio, declarado monumento nacional, propiedad del Estado. Al finalizar el año de 1906 la Comisión presentó al Ministerio una Memoria comprensiva de los trabajos había realizado, acompañado de un plano de las ruinas descubiertas y un álbum de fotografías de ellas y de los principales objetos que había logrado reunir, y que ya formaba en Garay el núcleo y comienzo del Museo Numantino. Desde el momento en que comenzaron las excavaciones se empezaron a coleccionar los objetos recogidos y los infinitos fragmentos de muchos (...) y con estas colecciones hemos formado el Museo Numantino (...). Pero la verdadera trascendencia en el plano de la tutela pública del Patrimonio Arqueológico se encuentra en la propia identidad de la Comisión, ya que como apunta Daniel Casado Rigalt *ya no se trataba de una iniciativa personal sino de un equipo coordinado en el que cada miembro ejercía una función específica en el desempeño de su cargo. Revelaba una organización hasta entonces inédita en España, donde las excavaciones arqueológicas habían dependido de iniciativas particulares, carentes de equipos de trabajo. En Numancia, se abordaba un intento primerizo de excavación en superficie con el apoyo institucional necesario siguiendo la regulación propuesta por el arqueólogo francés Salomón Reinach, para quien solo debía confiarse excavaciones a los representantes del Estado o a sociedades eruditas*<sup>2734</sup>.

Sin embargo, nuevamente las dificultades encontradas con los propietarios privados a la hora de acometer nuevas excavaciones llevaron a presentar al senador Catalina García una nueva propuesta de expropiación del terreno por utilidad pública, a raíz de las dificultades que habían los propietarios particulares: *A la vez que he traído este consuelo y esa satisfacción, vengo con una impresión dolorísima, porque ha ocurrido que uno de los propietarios de Numancia, no obstante las advertencias y consejos que se le habían dirigido, introdujo la piqueta en lo más recóndito e inexplorado de las primitivas ruinas, precisamente de las más auténticas, levantando 5 metros de basamento de la muralla, habiendo quedado como desgranados y al aire libre, elementos muy importante de la construcción. Contra este atentado se protestó desde luego, y el guarda de los trabajos dirigió sus quejas al Juzgado. El juez de Instrucción me ha llamado a declarar con este motivo (...) El Juez creo que dictará auto de procesamiento contra el malhechor que ha realizado este daño (...). Pero repito que ni advertencias, ni consejos, ni amenaza, han servido, porque sin duda aquel hombre ha dicho: la propiedad es mía, y por consiguiente, hago en ella mi voluntad, olvidando que se trata de un monumento nacional, y aunque tenga el uso y aún el abuso de su propiedad*

---

<sup>2733</sup>Excavaciones de Numancia: Memoria presentada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por la Comisión Ejecutiva. Publicase de Real Orden, Madrid, MCMXII, Imprenta Artística, de José Blass y Compañía, San Mateo, I.

<sup>2734</sup> CASADO RIGALT, Daniel José Ramón Mérida (1856-1933) y la arqueología española, Real Academia de la Historia, 2006, p.230.

territorial, no puede tocar a lo que constituye la parte gloriosa y nacional, la parte moral, por decirlo así, de aquel monumento; y yo pido al Sr. Ministro que se sirva intervenir en la forma y medida que le consientan sus atribuciones (...). La falta de una asignación presupuestaria para realizar la expropiación se convertía en un obstáculo, por lo que el senador Catalina García solicitaría al Ministro de Instrucción Pública una cantidad considerable: *El Sr Ministro de Instrucción Pública se ha adelantado a una cosa que yo iba a decir, y es la conveniencia de facilitar, y aun de acelerar los expedientes de expropiación, forzosa si fuera menester; pero en el año anterior la Comisión, y singularmente yo que me encargué de eso, hicimos alguna compra de terreno en la parte superior del cerro, en lo que se puede llamar el solar numantino, y no encontramos dificultades para su adquisición, aun cuando no fue por los términos de la expropiación forzosa, cuyos rigores han conocido mejor que nadie los mismos propietarios que de ellos quedaron advertidos; pero como disponemos de un crédito pequeño, y como el afán principal y legítimo de los comisionados es el descubrir pronto y mucho, no dimos a este asunto de la expropiación todos los vuelos que quizás necesitara. Por eso yo pensaba decirle al Sr. Ministro lo mucho que facilitaría el acelerar esta expropiación, porque están muy bien dispuestos todos los propietarios, aun este mismo que ha hecho lo que ha hecho, probablemente habrá sido con el fin de dar más valor a su terreno y dar prisa para que se le adquiriera. De modo que si contásemos con un crédito que no fuese tan mezquino, mezquino no en sí, sino en relación con la necesidad a que se refiere, pues son únicamente 15.000 pesetas lo consignado en el año anterior, hubiéramos podido comprar casi todo el terreno necesario (...). Si al Sr. Ministro le parece bien, podemos mover este asunto de las expropiaciones (...). Si juntamente con esto pudiéramos adquirir y conseguir que el Estado se declare dueño absoluto de la superficie del suelo y del subsuelo de Numancia, habríamos hecho una verdadera adquisición.* La respuesta del Ministro de Instrucción Pública, Rodrigo San Pedro, aclararía el estado en que se encontraba la tutela de la excavación de la ciudad de Mérida: *Como comprende seguramente mi amigo el Sr. Catalina, yo tengo que moverme dentro de los créditos que existen en el actual presupuesto, y no depende de mí exceder esta cifra (...) de tal suerte, que las expropiaciones deben verificarse sin otro gasto más que el de la expropiación indispensable, dejando para después los trabajos muchos más costosos de exploraciones, descubrimientos, etc., porque si se invierten los términos podría suceder que en aquellos sitios donde se pudiera hacer excavaciones, hubieran desaparecido ya los restos que se persiguen*<sup>2735</sup>. Una serie de disposiciones legislativas se irían promulgando a lo largo del periodo para que fueran expropiados los terrenos necesarios para continuar las excavaciones en Mérida, como la **Real orden de 7 de octubre de 1914**, donde se establecía cuales serían los terrenos que debían de ser adquiridas, debiendo hacerlo mediante expropiación forzosa, *conforme al artículo 4º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 8º del Reglamento para la ejecución de la Ley*, que así lo establecen terminantemente, y *al efecto la Real Orden que se dicte llevará consigo la declaración de utilidad pública y la necesidad de la expropiación*,

<sup>2735</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión del miércoles 17 de julio de 1907, pp.926-928,

*dada la conformidad de los interesados en la venta de que se trata, conforme a la ley de 10 de enero de 1879.*

Unos días después sería promulgada la **Real orden de 14 de octubre de 1915** declarando de utilidad pública y la necesidad de expropiación de un terreno para descubrir el Anfiteatro Romano de Mérida, en cuyo Informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Instrucción Pública se precisaba *que con el fin de dar el debido impulso a las excavaciones para descubrir el anfiteatro romano de Mérida, que se halla enclavado en la finca rústica llamada Plaza de Toros y Baños, propiedad de Don Carlos Pacheco Lerdo de Tejada, se hace necesario adquirir al mismo las tierras de labor que cubren las arenas del expresado anfiteatro, que tienen una extensión de 28 áreas y 98 centiáreas, que al precio de 100 pesetas suman un total de 2.173 pesetas, precio que está en relación con el de las adquisiciones hechas para el descubrimiento del Teatro, y en cuyo precio están de acuerdo el propietario y el exponente, faltando solo que por el Ministerio se disponga la adquisición de dicha parcela en el expresado precio y en consecuencia por el Estado con cargo al crédito de 15.000 pesetas, consignado en el Presupuesto vigente, autorizándole para firmar la correspondiente escritura y llenar los demás requisitos legales, advirtiéndole que por ser crecida la cantidad y mucha proporcionalmente la tierra que habrá que extraerse para descubrir el mencionado Anfiteatro, bastará adquirir en el presente ejercicio económico solamente la mitad de dicha parcela, abonando su importe de 1.086 pesetas 50 céntimos y adquirir la otra mitad en el ejercicio próximo, significando que si no se acompaña el título de propiedad es porque obra en el Ministerio con motivos de las expropiaciones para descubrir el Teatro Romano enclavado en la misma finca, fueron dispuestas por varias Reales órdenes. La primera de ellas fechada en 30 de septiembre de 1910. Una vez que considerando la comunicación del Director de las excavaciones y de la Asesoría Jurídica, sería propuesto que se dictase la oportuna Real Orden declarando de utilidad pública y la necesidad de expropiación de la referida parcela, siguiéndose los demás trámites necesarios de la Ley de 10 de enero de 1879 y Reglamento para su aplicación, por lo que se dispuso que se remitiera al Gobernador Civil de Badajoz, para que surta sus efectos en el expediente de expropiación propiamente dicha que tendrá por cabeza la presente Real Orden, la escritura de aprobación de la partición de los bienes al fallecimiento de don Alonso de la Encarnación Pacheco y Blanes, o sea el título que acredita ser de la propiedad de Don Carlos Pacheco y Ledo de Tejada, el expresado terreno.*

A comienzo del siglo XX, la mayor parte de las excavaciones que se llevaban a cabo fuera del recinto del anfiteatro escapaban del control de la administración, interviniendo solamente con motivo de las obras públicas que con frecuencia se acometían, como ocurriría en 1903, con motivo de la construcción de la línea férrea entre Cala y San Juan de Aznalfarache. El descubrimiento de la estatua de Diana en 1900 en la parte alta contigua del teatro podrá haber supuesto una nueva iniciativa de tutela pública, recabando fondos y acometer nuevas excavaciones por parte del Estado, pero la dramática situación de las finanzas públicas tras la pérdida de las últimas colonias no

llegó a ninguna resolución oficial, por lo que siguieron las excavaciones desordenadas que se estaban realizando en este momento en la antigua ciudad romana. En el Informe de 1916 que redactó Amador de los Ríos sobre los inconvenientes que se producían a la hora de realizar las excavaciones pertinentes en Itálica, reflejaría nuevamente los obstáculos que se encontraban los investigadores a la hora de realizar excavaciones arqueológicas en los fundos privados, por lo que solicitaría que fuera adquirida por el Estado los terrenos lindantes al conjunto arqueológico para su mejor conservación: *Otro de los inconvenientes es consecuencia natural del desconocimiento absoluto que, oficial y particularmente, existe respecto a los linderos propios de aquel edificio. Hace constar un escritor, apasionado de Itálica, reproduciendo un suelto publicado el 26 de julio de 1865 en La Correspondencia de España, que la Diputación Arqueológica de Sevilla, años ha disuelta, había presentado a la Diputación Provincial, un luminoso informe, en el cual, entre otras cosas, consignaba la necesidad de que se deslinden los terrenos confinantes al dicho monumento; pero nada se hizo, y en balde solicité de la ilustrada Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos estos antecedentes para mi labor tan indispensables, y que juzgué deberían constar en su Archivo, como en balde han sido las gestiones oficialmente hechas cerca del Registro de la Propiedad en Sevilla. Porque no sólo para cercar en su conjunto las ruinas y ponerlas a cubierto de toda tentativa, es necesario que el Estado adquiera los terrenos circundantes, sino para que se haga posible la exploración y el descubrimiento de lo que dichos terrenos ocultan, y por el debido desahogo de las ruinas mismas; y como no constan los linderos, los cuales han de aparecer en las escrituras de propiedad de los predios colindantes, y podría el Estado adquirirlo que realmente es suyo, se impone la necesidad del deslinde del monumento*<sup>2736</sup>. En el **Informe del 14 de diciembre de 1911 para ser declarado Monumento Nacional de las ruinas de Itálica**, redactado por el propio Rodrigo Amador de los Ríos<sup>2737</sup>, en la que no se fundamentaría el valor monumental que representaba las antiguas ruinas romanas, al calificarla como sino que precisaba el papel que debía de tener el Estado en su tutela, como podemos apreciar en los siguientes términos: *Mera depositaria de los tesoros artísticos e históricos llegados por fortuna hasta nosotros en nuestra España, obligación es sacratísima para la generación presente, la de transmitirlos á las venideras en la mayor integridad y en la mejor forma posibles, no sólo procurando con verdadero interés y persistente ahínco a la conservación de tal y tan inestimable deposito, sino mejorando, á ser realizable, las condiciones en que aparecieron y actualmente se encuentran, á fin de prolongar su existencia por todos los medios y sin descanso. Porque no son únicamente los indicados tesoros testimonios elocuentísimo y de incontestable eficacia respecto de la nacional cultura en el tiempo; no, prueba irrefutable tampoco, de nuestra grandeza ya pasada, sino –lo que es más importante*

<sup>2736</sup>AMADOR DE LOS RÍOS, José “El anfiteatro de Itálica. Noticias acerca de este monumento y de las excavaciones que en él, de orden del Gobierno se practican” en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año XXX, Julio-Agosto, 1916, Núms. 7 y 8.

<sup>2737</sup>Academia. *Boletín de la Academia de San Fernando*, Segunda Época, Madrid, 31 de marzo de 1911, Año V, Núm.17, pp.140-141.



*aún- textos vivos y constantes, cuyas continuas y provechosas enseñanzas han contribuido, contribuyen y seguirán contribuyendo, mientras ellos subsistan, al desarrollo de las Artes y de las Ciencias Patrias. Así, pues, tanto por la obligación ineludible y sagrada de conservarlos para las edades futuras, como por la lección perdurable que entrañan, y por los beneficios que con sus enseñanzas proporcionan, deber es del Estado atender á ellos con agradecida predilección cariñosa, librándolos de todo peligro y de toda perjudicial contingencia en el presente, y para el porvenir de todo riesgo.*

Por **Real Orden de 13 de diciembre de 1912**, Itálica entraría a formar parte del reducido número de monumentos históricos-artísticos españoles, después de un largo camino de disposiciones en orden a su protección y conservación que a lo largo del siglo XIX se había ido promulgando: *Vista la mención elevada de este Ministerio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, proponiendo que sea declaradas Monumento Nacional las ruinas de Itálica, liberándolas así de todo peligro y de toda perjudicial contingencia en el presente como de todo riesgo para el porvenir, en atención a la lección perdurable que entraña y a los beneficios que con sus enseñanzas proporcionan.* Posteriormente a raíz de la **Real Orden de 5 de febrero de 1913** se dispondría que el Anfiteatro que formaba parte de las ruinas de Itálica, fuera declarado Monumento Nacional. A raíz de la declaración de Monumento Nacional, Itálica empezaría a contar con un presupuesto virtualmente regular, por lo que se pudieron realizar nuevas excavaciones entre 1914 y 1915, por Rodrigo Amador de los Ríos, sobrino de Demetrio de los Ríos. Finalmente, cabe mencionar que entre 1919 y 1933 se iniciarían por primera vez una serie de excavaciones a gran escala en las calles y casas de la ciudad romana, al poderse adquirir unos terrenos de olivar entre el pueblo de Santiponce y el anfiteatro, un sector de la urbe que se ignoraba todo, excepto que había mosaicos a escasa profundidad, nombrándose para ello como director de las excavaciones a Andrés Parladé, Conde de Aguiar. Como posteriormente señalaría Juan de Mata Carriazo eran *las primeras excavaciones realizadas oficialmente en nuestro siglo en el interior del recinto de la ciudad romana.*

#### **5.3.5. El Estado adquirente de los bienes arqueológicos en el ámbito de las excavaciones arqueológicas.**

*- La adquisición de obras arqueológicas por el Estado por descubrimiento fortuito y la recompensa del descubridor en virtud de la ley de 1911: El caso del tesoro de Aliseda.*

En caso de descubrimiento fortuito se contemplaba en el artículo 5º de la Ley la adquisición por el Estado las antigüedades descubiertas casualmente en el subsuelo o encontrada al demoler antiguos edificios, subrayándose la irretroactividad de la ley, al precisar que solamente sería a partir de su promulgación (art.5 de la Ley). Probablemente sería la primera vez en la legislación española que se estableciese una recompensa al descubridor de bienes, como aparece reflejado en el artículo 6º del Reglamento de 1912 *El*

*descubridor recibirá, al hacer entrega de los efectos encontrados, como indemnización, la mitad del importe de la tasación legal de dichos objetos, correspondiendo la otra mitad en el segundo caso al dueño del terreno.* En el artículo 7 del Reglamento precisaba que en el caso de que se descubriese en obras públicas daría un premio en metálico: *Cuando los hallazgos se realicen en obras públicas o subvencionadas por el Estado, éste dará al descubridor, como premio, una equivalencia de su valor intrínseco, si el objeto es de metal o de piedras preciosas, y en los demás casos, le indemnizará con arreglo a la tasación legal a la que se refiere el artículo 6º del Reglamento.* En el artículo 25º del Reglamento precisa que *El Estado concederá cada tres años dos premios en metálico y uno honorífico a los tres exploradores que hayan logrado descubrimientos de mayor importancia, a juicio de una Comisión calificadora (...).*

Una de las adquisiciones más importante por el Estado en esta etapa fue la del tesoro de Aliseda, que marca la nueva situación jurídica que como aplicación de la ley de 1911 en su artículo 5º va a tener los descubrimientos fortuitos, que se diferencia de la situación que había provocado en años anteriores el descubrimiento de la Dama de Elche<sup>2738</sup>. El tesoro de Aliseda se descubre fortuitamente el 29 de febrero de 1920, por un muchacho llamado Jenaro Vinagre, al extraerla en un terreno comunal de la villa de Aliseda (Cáceres), concretamente una vasija y unas cadenas y pulseras de oro, poniéndolo en conocimiento de los dueños del tejlar, por lo que rebuscaron en el lugar encontrándose otras piezas arqueológicas, entre las que se encontraron diademas, objetos de plata, oro, platas y piedras preciosas. Como hace constar en el periódico La Epoca el 30 de septiembre de 1920, los descubridores optaron por ocultar los objetos descubiertos, repartiéndoselas, vendiéndolas una parte a un relojero de Cáceres, por lo que no fue informado a las autoridades públicas pertinentes. Al enterarse el secretario del Ayuntamiento de Aliseda del descubrimiento fue presentado una denuncia en el Juzgado, por lo que se incautó ésta parte de las alhajas vendidas en Cáceres, y otro sería recuperado por la policía. Los hallazgos fueron denunciados por la Comisión Provincial de Monumentos de Cáceres, depositándolo en el Ayuntamiento, que como así consta del propio Informe, *a consecuencia de lo cual, reconocido que, conforme a lo dispuesto por la ley y reglamento de Excavaciones y Antigüedades sobre los hallazgos fortuitos en el subsuelo son dichos objetos de propiedad del Estado, se dispuso fueran depositados en el Museo Arqueológico Nacional para lo precedente respecto a la indemnización a que tienen derecho los descubridores.* Arturo Mélida, Director del Museo Arqueológico, se personó en Cáceres para examinar las joyas, comprobando el valor arqueológico de los mismos, dando cuenta de los descubrimientos a las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia,

<sup>2738</sup>MELIDA, José Ramón “Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional en 1920: notas descriptivas” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Madrid, Tercera Epoca, T.XLIII (enero-diciembre, 1922), pp.161-172 y 341-353.

concretamente en la primera el 9 de abril de 1920, donde mostraría fotografía de las piezas. La Academia por su parte mostro un especial interés por que dichos objetos no salieran de España, por lo que se acordó que el Señor Tormo hiciera las oportunas gestiones cerca del Gobierno<sup>2739</sup>.

En base al Informe presentado por la Real Academia de la Historia y la Comisión de Monumentos de Cáceres sería promulgada la **Real orden de 21 de mayo de 1920** relativa al hallazgo de un tesoro antiguo en las cercanías de la Aliseda, provincia de Cáceres. La aplicación de la ley giraría en torno al hallazgo Casual del tesoro y la venta fraudulenta que se había realizado en torno a ella: *Resultando que por las noticias consignadas en el referido oficio, por el informe de D. José Ramón Mélida, que ha examinado el tesoro, y por las fotografías de parte de los objetos, se trata del hallazgo de un tesoro, descubierto casualmente por unos obreros al extraer tierras en un ejido del ya citado pueblo, habiendo los descubridores vendido parte a un relojero a Cáceres, interviniendo la Autoridad Judicial, a la que fue entregada otra parte, la más valiosa del tesoro, por un fraile franciscano, quien a su vez lo recibió bajo secreto de confesión, objetos que componen un tesoro de importancia fenicia del tal importancia arqueológica y artística, que no tiene similar en la historia de los hallazgos arqueológicos españoles, más que en el de Guadarrazán.* De esta manera se establecía la adquisición pública de los bienes arqueológicos descubiertos casualmente: *Que siendo antigüedades encontradas casualmente en el subsuelo, éstas son propiedad del Estado, pues así lo preciben los artículos 5º de la Ley de julio de 1911 y del Reglamento de 1º de marzo de 1912(art.1º).* Se determinaría la indemnización que le correspondería descubridor, que al hacer entrega de los efectos encontrados según determinaba el artículo 5º de la Ley en su párrafo 2º y el 6º del Reglamento, sería la mitad del importe de la tasación legal de dichos objetos (art.2). La tasación, con arreglo a los artículos 4º y 6º de la ley y 11 y 12 del Reglamento, debería llevarla a cabo una Comisión de tres señores Académicos de la Historia y de Bellas Artes, uno de los cuales podrá ser designado por el particular expropiado, Comisión que, dada la importancia de la tasación, deberá constituirse con académicos numerarios de las Academias de Madrid, como así constaba en el artículo 11 del Reglamento (art.3). Sería nombrado para formar parte de dicha Comisión, conforme a la propuesta de la Junta Superior de Excavaciones, a José Ramón Mélida, académico de número de las Reales Académico de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando, y a Antonio Vives, Académico de número de la Historia (art.4º), por lo que para poder ser mejor estudiadas por éstos se dispuso su traslado al Museo Arqueológico Nacional, donde quedaría depositado el tesoro hasta que se ordene por la Superioridad su definitivo destino (art.5). Se transmitiría por parte del Estado *las gracias a cuantas entidades y personas hayan intervenido*

---

<sup>2739</sup> Boletín de la Real Academia de Historia, 1920, Tomo 76, p.480.

*en que el mencionado tesoro no desaparezca, contribuyendo así a que la riqueza arqueológica de la Nación reciba un importante aumento y la cultura patria interesantísimos ejemplares de estudio (art.6º), fórmula que se repetiría en otros casos de descubrimientos fortuitos.*

Por fin se le haría entrega formal por el Juez de Instrucción, en la Sucursal del Banco de España en Cáceres, trasladándose posteriormente al Museo Arqueológico Provincial en calidad de depósito provisional, el día 26 de septiembre de 1920. Cabe destacar la amplia labor de divulgación científica que realizaría el propio Mélida con la publicación de una serie de artículos en la que destacaba la importancia que el tesoro descubierto tenía en el ámbito de la historiografía española<sup>2740</sup>. Probablemente sería la cuantía de la indemnización que debía darse a los propietarios lo que dilato en el tiempo la adquisición de estas piezas por el Estado, por lo que no fue hasta 1926 cuando se nombrase la Comisión de académicos de historia y de Bellas Artes, a propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, nombró una Comisión de Académicos compuesta del Sr. Mélida, por la Real Academia de la Historia, y por la de Bellas Artes, Don Antonio Vives, y por designación de los descubridores, Don Narciso Sentenach, de la de Bellas Artes; cuyo extenso y razonado dictamen, después de consignar no ser posible deducir el valor comercial de este tesoro de su valor arqueológico porque los objetos que lo componen por su misma rareza no son de los que se ofrecen en el comercio de antigüedades, y haciendo constar, que en el caso presente no se trata de una adquisición a justipreciar, sino de objetos propiedad del Estado y lo pedido por la Superioridad era de tasación legal para que la mitad de ella pueda ser satisfecha como indemnización a los descubridores, apreciando el valor intrínseco del tesoro en y proponiendo se aumente en diez veces la mitad del expresado valor, fijaren como indemnización la cantidad de 16.976 pesetas con 75 céntimos, como así consta en el Informe de la Real Academia de la Historia de 1926. El tesoro que había quedado depositado en el Museo Arqueológico quedará definitivamente incorporado en las colecciones del Museo Arqueológico a raíz de la promulgación de la Real Orden de 12 de junio de 1926<sup>2741</sup>.

**- El derecho de tanteo y retracto.**

Otra de las novedades que aportaría la normativa sería el derecho de tanteo y retracto que asume la Administración Estatal. En palabras de Miguel Coca, en una aproximación a los que él denomina derechos adquirentes, distinguiría entre el tanteo, que otorgaba a su titular la facultad de adquirir un bien que se halla en una determinada situación objetiva o subjetiva, con preferencia a cualquier otro adquirente hipotético, cuando se proyecte su enajenación, y por el “tanto” proyectado. En el retracto, la diferencia esencial

<sup>2740</sup> MÉLIDA ALINARI, J.R. Tesoro de Aliseda, *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, 1921, pp.96-97.

<sup>2741</sup> CASADO RIGALT, Daniel “José Ramón Mélida, impulsor de la arqueología extremeña en el primer cuarto del siglo XX”, *Revista de Estudios Extremeños*, Vol.62, N.1, 2006, pp.11-84.

con el anterior derecho, se cifra en que la facultad adquisitiva preferente que tiene su titular, recae sobre un bien ya enajenado, y por ende a cambio del “tanto” ya satisfecho por el adquirente<sup>2742</sup>. Su inclusión en el Código Civil en los artículos 1507 y hizo poner en cuestión el derecho absoluto del derecho de la propiedad privada, especialmente en la libertad de disposición de un bien. En el tanteo el propietario es libre de decidir sobre la disposición del objeto o no. Si decide no disponer, no ha lugar a seguir elucubrando, porque el tanteo no podrá actuarse. Si por el contrario, decide disponer, se produce la interferencia si se actúa el tanteo. La interferencia consiste en que el bien no tendrá el destinatario o receptor que el propietario disponente hubiera previsto. La voluntad de transmitir, de disponer, resulta intacta a pesar de que se ejercite el tanteo, lo único que se ve afectado es el encauzamiento hacia otro sujeto que ese acto dispositivo supone. El retracto es un derecho restrictivo de la propiedad, en la medida que lo es de la libre disposición entendida en su faceta negativa. La libre disposición o facultad dispositiva del propietario, se centra en la libertad para decidir la enajenación del bien. En este sentido, es cierto que el retracto no impide que el adquirente (comprador-propietario) enajene libremente su derecho a un tercero. Pero esta libre disposición tiene también una faceta negativa: libertad para decidir la no enajenación del bien. Y es ésta, la faceta que quiebra en el retracto, ya que el retrayente, puede forzar esta enajenación en su favor por parte del comprador-adquirente-propietario o de cualquier adquirente-propietario, al margen de su voluntad, por lo que la facultad dispositiva correspondiente al derecho de propiedad que ostentan estos sujetos no es libre. En algunos sectores doctrinales se daría diferente repercusión en el tanteo y retracto, así Augusto Comas, en su obra *La revisión del Código Civil español* (1900), el tanteo era admisible, mientras que se consideraba con tintes muy negativos el derecho de retracto<sup>2743</sup>.

Evolución legal del derecho de tanteo y retracto en el ordenamiento español. En la *Novísima Recopilación* se recogía tres tipos básicos de retractos: el de abolorio o gentilicio, el del superficiario y el de comuneros. En el Proyecto del Código Civil de 1836, que inserta el derecho de la propiedad como sagrada e inviolable, va a coexistir con el derecho de tanteo y retracto en el capítulo XI del Título III, Libro III (art.1152-1176), incluyéndose dos tipos: el de comunión o copropietarios (art.1154) y el enfiteútico (art.1155), delimitando conceptualmente entre el tanteo y retracto. Los derechos de adquisición preferente serían opuestos como en la Proposición de Ley de 11 de mayo de 1841, presentadas al Congreso por Gómez Acebo, Sánchez de la Fuente y Eugenio Díez, que en cuyas tesis contrarias se encontraba que iba en contra del derecho de la propiedad. a pesar de que fue aprobada como Proyecto de Ley, en sesión de 7 de junio de 1841, una vez remitido el texto al Senado, no pudo ser

---

<sup>2742</sup> COCA PAYERAS, Miguel, 1988, p.34.

<sup>2743</sup> COCA PAYERA, Miguel, 1988, pp.154-157.



aprobada al disolverse las Cortes el 24 de agosto de 1841<sup>2744</sup>. En el Proyecto del Código Civil de 1851 destaca la desaparición del derecho de tanteo, al igual que ocurriría en la Ley Hipotecaria de 1861 Rodríguez Morata, Federico A. Derecho de tanteo y retracto en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, Aranzadi Editorial, 2001. En este momento de menor auge de derecho de adquisición coincide con el mayor de las tesis fisiócratas y con la concepción de la propiedad privada como individual, sagrada e inviolable, es decir, con el nuevo orden producto de la Revolución Francesa (Bercovitz, Rodrigo, *Que es la propiedad privada*, Barcelona, 1977, pp.10 y ss.).

En el último tercio del siglo XIX surge una floración de derechos de adquisición preferente de nuevo cuño, manteniéndose parcialmente los históricos, apareciendo nuevas justificaciones doctrinales, en un difícil equilibrio, en el que se situaba por un lado el principio de que la propiedad es libre, así como la contratación, y el otro el de que los tanteos y retractos tutelan intereses supraindividuales, ya fueran familiares, ya generales a la sociedad (...) los retractos y tanteos comienzan a justificarse por razones de interés social o interés público. Las oposiciones a los derechos adquirientes se encontraban: 1º) El tanteo va contra la libre elección de la otra parte contraste y hace desaparecer al comprador; 2º) Los derecho de tanteo y retracto como limitaciones del derecho de la propiedad privada definido en el artículo 348 del Código Civil, concretamente el de tanteo en la libertad de disposición y en el retracto, el de la libertad de disposición, pero en su faceta negativa<sup>2745</sup>. En el artículo 21ª del Reglamento se preceptuaría: *El Estado se reserva siempre los derechos de tanteo y retracto en las enajenaciones que los poseedores de antigüedades pudieran otorgar, debiendo ejecutarse el de tanteo en la forma y modo establecido en el artículo 1637 del Código Civil, y de retracto dentro de los veinte días útiles siguientes a la venta (...).* Al mismo tiempo el Ministro podría acordar la sustitución de su derecho en los casos de las Corporaciones oficiales y en los particulares que diesen garantía bastante, con el reconocimiento de la nuda propiedad en el Estado (art.21.2 del Reglamento).

El impedimento de venta por parte del Estado a los particulares por derecho de retracto y tanteo se convierte en práctica habitual desde la aplicación de la Ley de 1911, siendo uno de los primeros casos significativos el ocurrido en Girona con el intento de venta del mosaico el Sacrificio de Ifigenia por parte de los hermanos Francisco y José Oliveras, supuestos propietarios del mismo. En el caso que nos concierne, el estado legal de propiedad del mosaico no estaba claro, como así se deduce de la lectura del Oficio de la Real Academia de la Historia del 27 de octubre de 1909, en el que se informa que había sido adquirido por los hermanos Francisco y José

<sup>2744</sup> COCA PAYERAS, Miguel, pp.88-106; RODRIGUEZ MORATA, Federico A. *Derecho de tanteo y retracto en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994*, Aranzadi Editorial, 2ª edición, Navarra, 2001, pp.44-47.

<sup>2745</sup> COCA PAYERA, Miguel, *Tanteo y retracto, Función Social de la Propiedad y Competencia Autónoma*, Real Colegio de España, Bolonia, 1988, pp.115-142.

Oliveras y Maranges, pero poniendo de manifiesto que el mosaico había pertenecido a una sociedad de vecinos de la Escala, cuyo objeto había sido *hacer excavaciones en Ampurias con ánimo de vender los objetos que encontraran emitiendo una especie de acciones hasta completar un capital de unas 2500 pesetas, compraron un trozo de tierra y tuvieron la fortuna de hallar el precioso mosaico que desde el primer momento excitó la admiración de cuantos lo contemplaron y el deseo de obtener por él una crecida cantidad. Al ir desapareciendo los socios, quedó el mosaico sino olvidado por lo menos solitario en la caseta que lo alberga, por lo que los propios hermanos Oliveras quisieron quedarse con la propiedad del mosaico (...)* para lo que *trataron de reunir todas las acciones y hacerse únicos dueños del mosaico, del cual tenían ya la llave como poseedores y la escritura o documento privado que sirvió para constituir la sociedad, único documento existente. Lograron reunir la mayoría de ellas, seis tengo entendida de las diez que creo se emitieron y de este modo desaparecido los otros socios quedaron poseedores y casi solos dueños del mosaico. Con el fin de asegurar su título quisieron obtener la caducidad de derechos de los asociados desaparecidos, cuyo derecho con más o menos fundamento pretendían tener diversas personas, asesorándose por el letrado de Barcelona, de D. Francisco Cambó, que siguiendo su consejo, publicaron en el Boletín Oficial de la provincia de Gerona un indicto convocando a los accionistas de ignorado paradero, e invitándoles a contribuir a las obras necesarias para asegurar la conservación del mosaico, percibiéndoles a tenor del artículo 395 del Código Civil que de no comparecer a tenor de la fundación de la sociedad quedarían decaídos de su derecho. Debido a que los accionistas ni sus causahabientes se presentaron, acudieron a la autoridad judicial obteniendo una sentencia, que se insertó en el Boletín Oficial de Gerona, declarando decaído de su derecho a los accionistas que no comparecieron. Se había delimitado el estado legal de la propiedad, aunque como el mismo Oficio dejaba en cuestión que Quizás esta sentencia no termina con toda reclamación en el futuro, pues puede haber menores que pudieran reclamar, pero de todos modos da un estado legal a la propiedad de los Sres. Oliveras sobre el mosaico. y aún si esto no pareciera suficiente quedaba el recurso que concede el Código Civil artículo 400 para terminar una propiedad proindiviso, cuando los codueños la quieren liquidar, esto es enagenarla por subasta y depositar las partes alicuotas de los codueños que no se conformen o no comparezcan. A raíz de una serie de acciones judiciales, quedaría como único dueño uno de los hermanos, José María Oliveras y Maranges.*

El 25 de abril de 1912 a raíz de un Oficio de Remisión se informaba de la venta en pública subasta de los bienes de José María Oliveras y Maranges, entre los cuales se encuentra el mosaico conocido como Sacrificio de Ifigenias de Ampurias, valorado en quinientas pesetas y en doce mil la totalidad del lote. La Comisión de Monumentos de Gerona había redactado un Informe por el que constaba como el mosaico en cuestión, *propiedad de una sociedad que por acciones habían formado varios vecinos de la Escala, había pasado a la posesión; ya que la propiedad era discutible, de uno de los varios accionistas que había logrado reunir la mayoría de las acciones, y que, por varios medios judiciales había intentado quedar como único dueño, sin quizás conseguirlo de un modo seguro, dificultad*

*importante que hasta ahora había sido uno de los obstáculos, además del elevado precio que se pedía para la adquisición de dicho preciado objeto por esta Comisión. El supuesto propietario como así constaba en el Informe de la Comisión había sido embargado por un acreedor y entre sus bienes, que se sacan a pública subasta, según se puede ver en el adjunto Boletín Oficial de la provincia correspondiente al martes 23 del corriente, se anuncia un lote de varias fincas, entre las que va comprendida la pieza de tierra que conserva el mosaico. La Comisión alegó que no se disponía de recursos suficientes para adquirir el lote completo, al estar formado por casas, huertas, y piezas de tierra asciende a pts. 12000 y entre esas fincas se asigna a la pieza de tierra del mosaico pesetas 500 como tasación, dejando la posibilidad de que si esta pieza se vendiera solo, aún cuando su valor triplicara, esta Comisión de Monumentos arbitraría recursos para adquirirla, pero respecto a todo el lote que en la subasta puede llegar a mas de 12.000 pesetas, nada puede hacer la Comisión de Monumentos de Gerona. Ante esta circunstancia, la Corporación suplicaría a esta Alta Corporación, que, invocando la acción que establece el reciente Reglamento para la ejecución de la Ley de Excavaciones promulgada por Real Decreto de 1 de marzo de 1912, en sus artículos 20 y 21 ejecutándose por el Estado las acciones de tanteo y retracto que establecen; bien por sí o ya delegándole en esta Comisión con objeto de que el mosaico pudiera quedar en su Museo, siempre que el precio en que se hubiera vendido entrara dentro de los recursos de que pudiera disponer.*

La reacción de la Academia de la Historia fue clara, ya que como se aprecia en el Oficio de 8 de mayo de 1912, reclamaría, previo dictamen de una ponencia encomendada a los académicos de números Excmo. Sr. Marqués de Cerralbo, e Ilmo. Sr. Don José Ramón Mélida, *que con la urgencia que el caso requiere, interponga su acción conforme a lo que previene el Reglamento para la ejecución de la vigente Ley de Excavaciones, en su artículo 20 y 21, para evitar que pase a manos extrañas ese mosaico, ya que por fortuna y por excepción se conserva, mientras otros asimismo importantes han desaparecido, por ser este género de antigüedades el más expuesto a deterioro.* En el Boletín de la Real Academia de la Historia, José Ramón Mélida exhortaba la acción que el Estado debía de realizar sobre la adquisición del mosaico romano en cuestión: *Penosamente impresionada la Academia al tener conocimiento de la comunicación que con fecha 25 de abril último le ha dirigido la Comisión de Monumentos de Gerona, justamente alarmada al ver amenazado de enajenación y acaso de destrucción el conocido y notabilísimo mosaico representativo del Sacrificio de Ifigenia y descubierto tiempo ha en las ruinas de la antigua ciudad de Emporión, comisionó para que estudiaran el asunto y propusieran su resolución a los que suscriben, los cuales entienden que lo procedente es que la Academia haga suyos los deseos de la expresada Comisión, y conforme ella indica se dirija, por el medio que parezca más rápido y eficaz, a la Superioridad en súplica de que evite tal enajenación, utilizando los medios al efectos establecidos en la Ley de Excavaciones, últimamente promulgada. El caso es grave y urgente, por cuanto el Boletín Oficial de aquella provincia, en su número del 23 de abril, anuncia por término de veinte días la venta en pública subasta de ciertos bienes embargados a su dueño por un acreedor, y entre los cuales bienes hay un lote de varias fincas, estando comprendida en una de estas una pieza de tierra llamada el Mosaico, por estar en ella enclavado tan preciado monumento arqueológico. Con*

*laudable celo se muestra deseosa la Comisión de arbitrar recursos para adquirir la pieza del Mosaico, si por ventura se vendiese separadamente, y aunque triplicase su valor; pero no siendo factible tal propósito respecto al total, y en previsión de las contingencias posibles, se viene a la mano invocar la citada Ley de Excavaciones, que en los artículos 20 y 21 de su Reglamento faculta al Estado para ejercitar las acciones de tanteo y retracto respecto de aquellas antigüedades que salgan a la venta. En consecuencia, los que suscriben proponen a la Academia que con la mayor diligencia y encarecimiento pida al señor Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes que utilice los medios que las leyes le conceden para evitar pase a manos extrañas ese notable mosaico, mientras otros no menos interesantes han desaparecido, por ser este género de antigüedades el más expuesto a deterioro*<sup>2746</sup>.

Las gestiones del Ministerio de Administración Pública no se hicieron esperar, ya que sería enviado un telegrama dirigido anteayer al Gobernador de la provincia por el propio Subsecretario de Instrucción Pública, que como así constaría en el Oficio de 27 de mayo de 1912, *encargándole con todo encomio que de acuerdo con esta Comisión, de los pasos necesarios para ejecutar el derecho de tanteo, que al Estado reconoce respecto a las antigüedades los artículos 20 y 21 del vigente Reglamento para la aplicación de la Ley de Excavaciones*. Pero la realidad fue que no pudo adquirirse la totalidad del mosaico, ya que la situación legal del régimen patrimonial del mosaico no dejaba claro que perteneciera únicamente a José María Olivera, por lo que precisaba en el Oficio *que si bien es cierto que por desgracia hoy no se consigue la plena propiedad de tan interesante objeto se adquiere una parte y se asegura el derecho a intervenir para su conservación, y la seguridad de que el dueño de las otras partes no podrá enagenar el mosaico sin contar con esta Comisión y siendo así cercenado su derecho y tendrá seguramente que acabar por vender el resto a ella*. El propietario de las otras partes podría ser el hermano del embargado, Francisco Oliveras, que en 1914 ofrecería vender su parte por 4000 pesetas, oferta que la Comisión desestimaría.

El derecho de tanteo por el Estado en la adquisición de las obras de arte sería abordado en el Senado el 28 de mayo de 1914. El Ministro de Instrucción Pública, Bergamín, recordaría la impronta que había ido cobrando el derecho de tanteo en la exportación de las obras de arte: (...) *No creo que hoy mismo se encuentre desprovisto en absoluto el Poder público de medios para impedir la salida de nuestro territorio de obras de arte; tenemos ya un derecho de tanteo y de retracto reconocido, aunque no para todos los casos, para una gran parte de esas obras artísticas (y los permite doblemente más, cuanto que el Estado puede ceder ese derecho a favor de las Corporaciones con tal que tengan la conservación de los objetos artísticos) reparar de alguna suerte el atentado que se venía cometiendo antes con impunidad contra nuestro tesoro artístico* (...). Aludiría la posibilidad de que una Corporación Municipal pudiera apelar al derecho de tanteo, al igual que el

---

<sup>2746</sup> MÉLIDA, José Ramón “El mosaico emporitano del Sacrificio de Ifigenia”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, Tomo LXI, 1912, pp.123-125.

propio Estado: *Ahora mismo ha ocurrido un hecho (...) algunos bajo relieves artísticos, joyas que se conservaba en Barcelona, se proponía realizar el gremio de curtidores a una casa extranjera. La Diputación de Barcelona acudió al Estado, diciéndole que, si no estaba económicamente capacitado para adquirir aquel objeto artístico, se permitiera a aquella Diputación el uso del derecho de tanteo y, en efecto se le ha concedido esta autorización, y la Diputación hará en su caso, si es que es válida la venta, la debida aplicación de ese derecho, y de ese modo no saldrá de Barcelona un objeto artístico tan importante y que allí quieren conservar. El límite de esta acción del Gobierno no estaría en la amenaza de la confiscación sino en la asignación económica: (...) desde el momento en que el Estado se reserva el derecho de tanteo y aun el de retracto para la adquisición de toda obra artística de propiedad particular; está salvado el principio porque no se expolia a nadie ni a nadie se le perjudica, no hace el Estado más que conservar lo que constituye ese tesoro de riqueza nacional; la dificultad está en el orden económico; eso representa una enormidad de dinero y por eso no sé si el Estado se encuentra en condiciones de poder llegar en su esfuerzo económico a donde llegaría nuestra voluntad y nuestro deseo de conservar las cosas artísticas (...)*<sup>2747</sup>.

**- La concesión del dominio de los bienes descubiertos por las Corporaciones Públicas e investigadores privados, públicos y extranjeros.**

La Ley y el Reglamento de 1912 van a conceder tanto a los descubridores españoles como extranjeros la propiedad de los bienes arqueológicos hallados a raíz de una excavación arqueológica autorizada. Así el Estado concedía a los descubridores españoles autorizados por él la propiedad de los objetos descubiertos en sus excavaciones (art.8.1). La Administración le concedía la propiedad al descubridor del objeto, siempre que no lo ocultara o destruyera, por lo que ya encontramos una modalidad de la limitación que se va a dar ir dando al derecho de propiedad en base al interés público, como así establece el artículo 15 del Reglamento: *El Estado concederá a los descubridores españoles autorizados por él, la propiedad de los objetos descubiertos en sus excavaciones. Esta no se extiende al derecho de destruirlos o menoscabarlos, al de ocultarlos o hurtarlos sistemáticamente al estudio científico ni al de enajenarlos libremente y exportarlos, salvo lo dispuesto en la Ley.* Además se le concedería la libre disposición del objeto al particular, pero con unas limitaciones: 1º) En caso de que fuesen objetos no duplicados, serían autorizados incluso a exportarlos, siempre que fuesen devueltos a España en el periodo de un año, teniendo que ser autorizado por el Ministerio (art.17 del Reglamento). 2º) Podrán transmitirlos por herencia, con la excepción de que en caso de que fuesen una serie completa y tuviese que separarse los ejemplares que la forma, con la consecuente pérdida de valor, el Estado adquiriría la colección completa, previo pago de la cantidad que fuese tasada (art.18 del Reglamento). 3º) En el caso de los poseedores de antigüedades conservarían su derecho de propiedad a las mismas, sin otras restricciones que las de

<sup>2747</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.39, Sesión del 28 de mayo de 1914, p.491.



inventariarlas y satisfacer un impuesto de 10 % en caso de exportación, reservándose siempre el Estado los derechos de tanteo y retracto en las ventas que aquellos pudieran otorgar. Si se tratase de descubridores extranjeros autorizados por el Estado harían suyos en pleno dominio un ejemplar de todos los objetos duplicados que descubran, y tendrán, durante cinco años, el derecho exclusivo de reproducir por procedimientos que no menoscaben la conservación de los hallazgos cuantos objetos encuentren en sus investigaciones. Los objetos no duplicados podría llevarlos al extranjero el descubridor para su estudio, comparaciones y clasificación, comprometiéndose a devolverlos al Estado español en el plazo de un año (art.8.4).

En el artículo 8.2 de la Ley se disponía la disposición de la propiedad de los descubrimientos a aquellas Corporaciones que bajo sus auspicios se habían realizado las excavaciones; en el caso de su disolución podía ser adquirido por la localidad donde se hubiese encontrado dichos bienes: *Cuando se tratare de una Corporación, y ésta se disolviera, dicha posesión revertirá al Estado, el cual, si así lo solicitare la localidad en que la colección estuviese instalada o donde los descubrimientos se realizaron, deberá autorizar su permanencia en los puntos referidos.* Se exigiría la óptima conservación de los objetos, con el objetivo de que puedan *cumplir los fines de cultura a que se destinan.* Por otra parte se contemplaba la transmisión libre de la propiedad por herencia de los bienes arqueológicos: *Los particulares transmitirán libremente por herencia el dominio de sus hallazgos; pero cuando éstos constituyan series cuyo valor se perjudicara notablemente al separarse los ejemplares que la formen, podrá el Estado, si por causa hereditaria tuvieran forzosamente que dividirse, adquirir la colección completa, previo el pago de la cantidad en que fuere tasada, con las garantías exigidas en artículos anteriores* (art.8.3). Mario del Amo critica estas disposiciones: *No quisiera terminar esta parte sin añadir un breve comentario a lo que constituye, sin duda, el aspecto más llamativo y sorprendente de la ley. Me refiero al derecho de la propiedad que concede a los hallazgos arqueológicos realizados por españoles y extranjeros en excavaciones autorizadas por el Estado. Este derecho continúa vigente (...) y no cabe duda que la ley de 1911, al establecer este principio de propiedad, estaban haciendo una concesión a un derecho profundamente arraigado en la sociedad, de forma que se quedaron a medio camino en lo que podía haber sido una norma progresista*<sup>2748</sup>.

**- Respeto al estado de dominio de los propietarios, con los límites del derecho de tanteo y retracto por parte del Estado.**

Los actuales poseedores de antigüedades conservarán su derecho de propiedad a las mismas, sin otras restricciones que las de inventariarlas y satisfacer un impuesto de 10 por 100 en caso de exportación, reservándose siempre el Estado los derechos de tanteo y retracto en las ventas que aquellos

---

<sup>2748</sup> DEL AMO Y DE LA HERA, Mariano “Las excavaciones arqueológicas y los museos en la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 1933”, B. *Anabad*, XXXIII, 1983, núm.2, p.260.

podieran otorgar, debiéndose ejecutarse el de tanteo en la forma y modo establecidos en el artículo 1.637 del Código Civil, y el de retracto dentro de los veinte días útiles siguientes a la venta. Este término se contará desde el día en que se hubiere tenido noticia por cualquier modo fehaciente, en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de haberse verificado la venta (art.9).

### **5.3.6. Los límites de disposición de la propiedad privada de los bienes privados.**

No cabe duda que la ley de 1911 representa un hito primordial en el seno de la intervención del Estado en el dominio privado, cuestión que estaba palpable en el ámbito de los propios investigadores, como podemos observar en la propia correspondencia de Bonsor. Hasta este momento, según la legislación que existía antes de la promulgación de la ley de 1911, tan solo se precisaba el permiso del propietario donde se deseaba excavar, aunque muchas veces la autorización no llegaba o se retardaba como le indica el propio Bonsor a Huntington, en la excavación que iba a impulsar en 1907 en los Alcores: *Siento decirle que todavía no he dado comienzo a mis excavaciones. No sabe lo difícil que resulta obtener permiso de los propietarios para excavar. No parecen tener prisa en ceder a nuestros deseos, en un asunto tan misterioso para ello como es la arqueología. Finalmente, después de estar esperando, durante casi tres meses, los permisos están llegando de todas partes*<sup>2749</sup>. Sin embargo, unos años más tarde en la misma correspondencia entre Jorge Bonsor y el hispanista norteamericano, Archer M. Huntington, fechada el 11 de marzo de 1912, se puede observar cómo ha ido cambiando la posición del particular con respecto al Estado, al aludir los problemas que había generado la nueva ley con respecto a la adquisición de bienes arqueológicos, ya que necesitaba de la autorización del propio Estado, al mismo tiempo que tendría que entregar los bienes descubiertos, novedad que en cierta forma criticaría el propio Bonsor en la correspondencia epistolar entablada con Bonsor: *Creo que la Ley ha sido redactada al completo por el Cuerpo Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Los arqueólogos del país no han sido consultados al respecto. Bien es verdad que hay muy pocos en España. Creería Ud. que actualmente yo soy el único excavador en toda la provincia de Sevilla (...) Un hombre rico como el marqués de Cerralbo puede que entregue complacido todo lo que encuentre a los Museos, pero el hecho de que ahora estaré obligado a hacerlo, es una cosa muy diferente. En Francia las Sociedades Arqueológicas del país fueron consultadas por el Gobierno. Todos votaron a favor de la libertad completa sobre dicha materia*<sup>2750</sup>.

En los oficios de las Comisiones de Monumentos y las Reales Academias de principios del siglo XX se refleja la impotencia que tenían las instituciones públicas ante la actitud de los propietarios. En el Oficio de marzo de 1902 de la Comisión de Monumentos de Sevilla redactado por su Vicepresidente Claudio Boutelou denunciaba a *los vecinos de Santiponce que*

<sup>2749</sup> Carta de Bonsor a Huntington, Mairena del Alcor, 19-12, 1907. MAIER, J., p.383.

<sup>2750</sup> MAIER, Jorge *Epistolario de Jorge Bonsor (1886.1930)*, Madrid, 1996, p.191.

*excavan en los corrales de sus casas y venden los objetos que obtienen sin que la Comisión pueda evitarlo al ser propiedades particulares, práctica que en cierta manera no encontraba ningún obstáculo legal ni administrativo. La lectura del Oficio es un claro reflejo de lo que estaba ocurriendo en un amplio número de excavaciones clandestinas que en estos años se estaban produciendo en los fundos privados: Con motivo del reciente descubrimiento en el inmediato pueblo de Santiponce de algunos mosaicos de valor que han sido adquiridos por personas de Madrid y Sevilla, la mayoría de los vecinos de dicho pueblo dedican actualmente al registro de los corrales de sus casas, removiendo las tierras sin orden ni concierto, extrayendo a diario objetos arqueológicos que estas familias casi nunca ve, y lo que es más triste, destruyendo totalmente las construcciones antiguas que le salen al paso, sin dar tiempo a reconocerlas y estudiarlas, y cuyos materiales venden a cualquier precio. El Informe finalizaba lamentando la imposibilidad de que las autoridades públicas pudieran actuar ante estos hechos, al disponer ilimitadamente sus propietarios de un supuesto derecho de disposición: Lo que en Santiponce ocurre causa a esta Comisión tanto mayor pena cuanto que por lo limitado de su facultad no halla manera de evitarlo, máxime tratándose de excavaciones que hacen en terrenos de particulares y por los mismos dueños. Pero ya que la Comisión no puede impedir lo que sucede en Santiponce, cree de su deber comunicarlo a esa Real Academia por si ella encuentra cortapisa que poner a unas devastaciones tan general y continuada.*

Los comentarios que al uso realizara De Liñán y Heredia en el artículo que publicara en la *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, en 1907, sobre los mosaicos de Fernán Núñez nos ilustra sobre el panorama que estaba viviendo la tutela pública del Patrimonio Arqueológico, unos pocos años antes de la promulgación de la Ley de 1911, donde nuevamente el irreductible derecho de la propiedad privada se convertía en un obstáculo insalvable a la hora de una incipiente intervención administrativa, y la desidia de la propia Administración incapaz de reaccionar ante estos hechos. Reproducimos como ejemplo de ello un trozo del artículo citado: (...) *el desprecio que tiene por lo que el vulgo llama tratos viejos, y que en realidad constituye nuestra ejecutoria de nobleza, los documentos justificativos de una historia brillante, que es casi lo único que nos queda, desgraciadamente, y que ignoramos, haciéndonos en ello muy poco honor y menos justicia. Pruebe de esto es, entre otras muchas, lo sucedido con los preciosos mosaicos descubierto en Fernán Núñez (Córdoba), en unas propiedades de los Duques del mismo título, merced a los trabajos del Sr. D. Antonio Jurado Moreno, desinteresada e inteligentemente secundados por la Administración de la Casa Ducal, don Francisco Luque Salas. En el mes de agosto de 1906, se hicieron los primeros sondeos, en un lugar llamado Loma cuarta de Valdeconejos, a unos 1500 metros de la villa de Fernán-Núñez (...). En la citada loma se encuentran numerosos fragmentos de mármoles de colores, vasos, ladrillos, trozos de distintos metales (...) acá y allá esparcidos. Lo más curioso de todo, son sin duda alguna, los pavimentos de mosaico, de los cuales se han salvados (...). De todo lo expuesto se deduce que en Fernán*

Núñez no se cree encontrar algo sino que se ha encontrado, que hay y que dejará de haber, al paso que se va, ó por abandono y lenta destrucción, o porque algunos de los comisionados del Museo del Louvre ó Británico, que me constan dan con muchas frecuencia sus paseos por España, ó algún avisado chamarilero anticuado de los que no faltan en cuanto saben que la cosa da de sí, se lo lleven a lugar seguro en donde más se aprecie (...) La política, el sublimado corrosivo de nuestra nación, no ha respetado ni la severa Arqueología (...) Hasta para salvar unas ruinas es menester ser político. ¿Qué hubiera sucedido con las glorias de Numancia si un particular generoso patriota... y Senador no las hubiera tomado bajo su protección?. Las de Fernán-Núñez no tienen hasta ahora padrino, y no se bautizan. Se ha dado cuenta a la Comisión de Monumentos de Córdoba, á la Academia de la Historia, á la de Bellas Artes de San Fernando, y desde agosto de 1906 aun no han tenido tiempo de contestar ninguna de estas corporaciones. Al Museo Arqueológico nadie ha dicho una palabra, y hacen bien. El Museo Arqueológico no tiene personalidad ni puede tenerla con tres mil pesetas para adquisición de objetos, material de oficinas, escribientes, publicación de Catálogos, etc. El Director del nuestro, mi queridísimo jefe Don Juan Catalina García y su digno secretario Álvarez Ossorio, hacen verdaderos equilibrios crematísticos; los demás empleados que servimos en la casa procuramos coadyuvar á la labor de los dignos Jefes, pero ni podemos tapar con el dedo las goteras; ni podemos evitar que el arco de la Arlanza lleve diez años tirado en el suelo de una sala (...) ni podemos inventar vitrinas, ni hallar el modo que nos impriman gratis los Catálogos, ni hacer otra cosa que oír las quejas que nos dan (...) <sup>2751</sup>.

**- El caso de la adquisición de los mosaicos de Itálica por Doña Regla Manjón, condesa de Lebrija.**

La semblanza de Doña Regla Manjón ha sido analizada en varias ocasiones tanto en la historiografía local como en la nacional, desde varias perspectivas. Como apunta José Beltrán *a diferencia de la otra única mujer que por aquellos años tuvo en Andalucía veleidades arqueológicas, extranjera pero afincada entre Sevilla y Niebla, la inglesa Elena Wishaw, creadora del Museo de Bordados y Cerámica de Andalucía en Sevilla y de la Escuela Anglo-Hispano-Americana de Arqueología de Niebla*<sup>2752</sup>, Regla Manjón se acercó a la arqueología sólo con un objetivo coleccionista, sin ningún tipo de interés lucrativo, animada por su afán de protección patrimonial en unos momentos en que la situación de este concepto en España era bastante deplorable<sup>2753</sup>. Tras la muerte de su marido, D. Federico Sánchez Bedoya, adquirió un palacio céntrico en la calle Cuna hacia 1901, donde siguiendo el proyecto del arquitecto José Sáez y López comenzaría un programa ornamental del inmueble con mosaicos extraídos de Itálica, que iría adquiriendo paulatinamente con unas indiscutibles miras eruditas, que en el caso de no haberlo hecho se hubiesen perdidos para siempre.

<sup>2751</sup> DE LIÑÁN Y HEREDIA Los mosaicos de Fernán Núñez, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, enero-junio 1907.

<sup>2752</sup> Sobre la figura de Elena Wishaw, ACOSTA FERRERO, J.M. *Elena Wishaw. Entre la leyenda y la realidad* Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 2003.

<sup>2753</sup> BELTRAN FORTES, José "La colección arqueológica de "la casa de Lebrija" en Sevilla: La Condesa Regla Manjón (1851-1938) e Itálica en los inicios del siglo XX" en *Revista de los Museos de Andalucía* Año IV Nº 7. Diciembre 2006, p.104.

Sus miras por el patrimonio arqueológico le llevaría a ser elogiadas por eruditos de la época como fue el caso de Rodrigo Amador de los Ríos, quien escribiría un artículo en la Revista de Archivos, Biblioteca y Museos en 1912 refiriéndose a la labor que había realizado en el campo de la protección del patrimonio histórico-artístico, en este caso, las antigüedades: *No es el Museo Arqueológico Provincial depositario único, en la hermosa ciudad hispalense, de las reliquias artísticas, artísticos-industriales, o meramente industriales, recogidas en distintas ocasiones y a la ventura, en el fecundo emplazamiento de la villa de Santiponce, explotado solar de la desventura Itálica famosa. Grandes son, ciertamente, la importancia, la categoría, la significación, el mérito y el número de los objetos de diversas clases conservados por fortuna en aquel Establecimiento provincial científico, los cuales han sido allí de diferente modo allegados, si bien es dado afirmar, sin grave yerro, que la parte mayor y más interesante procede de las excavaciones practicadas en el siglo XVIII por el diligente Bruna, de las dirigidas en el siguiente por el arquitecto D. Demetrio de los Ríos, y de las ejecutadas en 1903 por D. Manuel Fernández López. Desde que, -noticiosos del valor material de los objetos encontrados fortuitamente en la villa, alucinados por las riquezas que parecía ocultar la tierra, y estimulados y movidos por el incentivo de fáciles y fabulosas ganancias-, sin descanso y a mansalva se dieron los vecinos de Santiponce a revolver los corrales de sus viviendas, y a huronear por los campos y alrededores del lugar, si no han sido todos los hallazgos de la valía y del mérito que en especial proclaman la suntuosidad de Itálica los restos escultóricos del Museo Provincial, no ha sido tampoco menor, a lo que es de presumir, el número de los objetos extraídos con más o menos trabajos por los expresados vecinos en labor persistente y continua, con ocasión de la cual tantas cosas han sido codiciosamente destruidas, tantas otras han desaparecido para siempre, y borradas tantas huellas de la acrópolis italicense han quedado!. La labor destructora ha sido, pues, y sigue siendo a despecho de la flamante Ley y del Reglamento de Excavaciones, inmensa e incesante, y nunca con mayor propiedad puede decirse de Itálica (...) El gusto a tales antigüedades, desarrollados en algunos ricos personajes de dentro y fuera de Sevilla, y el amor por coleccionarlas se ha despertado en muchos de ellos, ha modificado la manera de pensar y de proceder de los naturales de Santiponce; y así, no hay mosaico ni objeto que se descubra, o que supongan descubierto, que no sea ofrecido y vendido a los dichos coleccionistas, con lo cual todos salen ganando, y aun llevado al Museo Provincial, cuyo Jefe, cuando el objeto es digno de ello, no vacila en adquirirlo, si sus recursos se lo permiten. Entre los coleccionistas sevillanos ocupa el primer lugar en tal sentido, indudablemente y por derecho propio, la Excm. Sra. D<sup>a</sup> Regla Manjón, viuda de Sánchez Bedoya, y Condesa de Lebrija. Tal y tan gran amor le inspira Itálica, y tal devoción sus ruinas, que no ha vacilado en sacrificar cuantiosas sumas con el nobilísimo propósito de recoger y conservar cuantas reliquias aparezcan de aquella población insigne (...). Séame, pues, dispensado haga aquí punto final, no sin encarecer antes, elogiar sobremedida, como es de justicia, y presentar cual modelo digno de imitación por otras muchas damas aristocráticas, la nobilísima conducta de la respetable Sra. D<sup>a</sup>. Regla Monjón, quien no ha vacilado en sacrificar su fortuna y consagrar su actividad incansable a la empresa por tantos motivos generosa y plausible de recoger y conservar dignamente las reliquias de todo género que el acaso pone con tanta*



*frecuencia de manifiesto aún, en el tantas veces removido y explotado solar de la famosa Itálica*<sup>2754</sup>.

Sin embargo, la publicación de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911, daría un vuelco a su consideración de mujer erudita, cuando en 1914 adquiriría de un excepcional mosaico policromo que hoy ornamenta el patio central del palacio, considerado por muchos como el mejor conservado de Itálica. El propio Rodrigo Amador de los Ríos, que lo había alabado años antes, como director de las excavaciones de las ruinas y amparándose en la nueva legislación, presentaría una denuncia contra los excavadores ante la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, concretamente contra Don Braulio Artillo y Velázquez, *que venía practicando excavaciones sin autorización legal*. Una vez consultada la Comisión Provincial de Monumentos, doña Regla lo habría adquirido por 8000 pesetas al no poder haberlo adquirido el Estado por falta de fondos<sup>2755</sup>. La Real Orden de 24 de junio de 1914 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes establecería que con arreglo al artículo 10 de la ley vigente en la materia, de 7 de julio de 1911, están sujetos a responsabilidad, indemnización y pérdida de las antigüedades descubiertas, según los casos, los exploradores no autorizados, y los que oculten, deterioren o destruyan ruinas o antigüedades, cuyas responsabilidades, a tenor del artículo 22 del Reglamento de 1º de marzo de 1912, serían declaradas de Real Orden, estableciéndose la indemnización a pagar el Estado por comisión de Académicos de Número de las Reales Academias de Madrid (1º), y el posterior traslado al tratarse de *mosaicos cuyas proporciones hacen muy difícil, si no arriesgado como expuesto a su destrucción, el levantamiento y el traslado de los mismos por parte del Estado*, se impone la conveniencia de su decomiso, y entendiéndose que deben pertenecer al Museo Arqueológico de Sevilla, con arreglo al artículo 12 de la repetida Ley, añadiendo la coletilla de *sin perjuicio de los fines de cultura a que la Ley misma atiende, y evitando así toda polémica o reclamación de la compradora de uno de los mosaicos, dispuesta, según parece, a evitarlas también por su parte, por lo que se establecería*1º. *Que se consideren decomisados los tres mosaicos de que se trata, pasando desde luego a ser propiedad del Estado, como parte integrante de las colecciones del Museo Arqueológico de Sevilla y 2º. Que de los tres mosaicos mencionados, el adquirido por Dª Regla Manjón, y en su caso los otros dos, si también los hubiese adquirido ya, se conserven en depósito y poder de dicha señora, en el concepto de usufructuaria vitalicia de los mismos, pero con la obligación inexcusable de que no podrá disponer de ellos ni*

<sup>2754</sup> AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo “El Museo de Antigüedades Italicenses de la Excelentísima Señora Doña Regla Manjón, viuda de Sánchez Bedoya, en Sevilla” en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año XVI, septiembre-diciembre, 1912, pp.18-19.

<sup>2755</sup> LOPEZ RODRIGUEZ, Juan Ramón “El coleccionismo arqueológico. Las piezas italicenses en la historia del coleccionismo sevillano” en BELEN DEAMOS, María; BELTRAN FORTES, José *Las instituciones en el origen y desarrollo de la arqueología en España*. Sevilla, 2007, pp.30-31.

*hacer cesión de usufructo, ni afectarlos a responsabilidad alguna sin autorización expresa de este Ministerio*<sup>2756</sup>.

Su defensa aparece reflejada en su breve estudio arqueológico sobre *El mejor mosaico de Itálica* publicada en el Boletín de la Real Academia de la Historia, defendiendo su propia labor por la conservación del patrimonio arqueológico y al mismo tiempo, aludiendo su ignorancia de la recién aprobada Ley de Excavaciones: *Ignorante quien esto suscribe de la entonces reciente Ley de Excavaciones, y habiendo ya en años anteriores, por cuenta propia, realizado repetidos trabajos de exploración en Santiponce y sus inmediaciones, trasladando y colocando en su casa numerosos objetos y mosaicos, que de otro modo hubieran sido destruidos, se apresuró a adquirir el descubierto por Ortiz, preparando lugar adecuado para su colocación. La hermosura excepcional de los pavimentos llevó allí en aquellos días a propios y extraños, y unos y otros invocaron la reciente Ley para impedir que el hermoso mosaico fuera arrancado del sitio donde apareció. Era, sin embargo, urgente su inmediato levantamiento. El campo abierto en que se encontraban, y en el cual, por temor a los merodeadores, precisaba tenerles pagados guardas noche y día; la necesidad de que su dueño se iba a ver bien pronto de labrar el terreno, hacían forzosa su traslación a lugar seguro, si no habían de sufrir en breve plazo la suerte de los bellísimos Mosaicos de las Musas y otros semejantes(...)* Felizmente varios eminentes personajes que en aquellos días visitaron Sevilla, el sapientísimo Padre Fidel Fita, que hoy preside la Academia de la Historia; el ilustre arqueólogo Marqués de Cerralbo, cuyas admirables excavaciones han asombrado a Europa; el marqués de Laurencín, tan grande apreciador del arte y de la historia, tomando con verdadero interés la conservación de estos monumentos, recabaron en Madrid, no sin contradicciones, del ilustrado Ministro de Instrucción Pública, entonces D. Francisco Bergamín, un Real Orden para que los mosaicos fueran entregados a la que suscribe. Hízose en el mes de agosto el levantamiento del que nos ocupa, así como su traslación, con infinitas precauciones, y hoy, completamente restaurado, pude lucir toda su original composición(...). Los otros dos bellos pavimentos, solicitados por el Comité de la Exposición Hispano-Americana, fueron trasladados por éste al magnífico palacio nuevo que está construyendo, previa renuncia a ruegos del mismo Comité, por la que suscribe, al derecho que la Real Orden de 24 de junio sobre ellos les concedía<sup>2757</sup>. La Junta de Excavaciones accedió a cambio de que los dos mosaicos menores se entregasen a la Comisión Organizadora de la Exposición Hispanoamericana, para su instalación en el Pabellón de Arte Antiguo, actual Museo de Artes y Costumbres Populares.

**- El caso de los exvotos de Castellar y Despeñaperros.**

Tomas Román Pulido, médico de Villacarrillo se hizo de una importante colección de bronce procedente de la Cueva de la Lobera, gracias a un familiar que vivía en Castellar. Hacia 1910 los propietarios del terreno,

---

<sup>2756</sup> GACETA DE MADRID, 186, 5 de julio de 1914, p.46.

<sup>2757</sup> MANJON MERGELINA, Regla “El mejor mosaico de Itálica” Boletín de la Real Academia de la Historia, 67, 1915, p.236.

Señores Romero, crearon la Sociedad de Excavaciones de Castellar, una empresa que tendría como objetivo primordial la explotación del sitio. Los objetos arqueológicos serían comprados por Juan Cabré que posteriormente los vendería al Museo de Barcelona. Ante este hecho, en 1913, la Real Academia de la Historia encargaría a los correspondientes M.Sanjuán y Jiménez de Cisneros un informe sobre la explotación que se estaba realizando<sup>2758</sup>. La aprobación de la Ley de 1911 pretendió cambiar el destino de ambos santuarios. En 1914, Juan Cabré, vinculado al Centro de Estudios Históricos, adquirió a Sandars los derechos de Despeñaperros e inmediatamente después lo donó al Estado. En 1916, Ignacio Calvo, del Museo Arqueológico Nacional y el propio Juan Cabré, inician las excavaciones del Collado de los Jardines, que durarían hasta 1918. Sin embargo, en el caso de Castellar, la situación fue distinta. Concedido por la Junta Superior de Excavaciones el permiso a Ignacio Calvo en 1914, nunca podría realizarlo por los impedimentos que pusieron los propios propietarios, por lo que tuvo que desistir e incluso como él mismo narra *Habiendo sabido que saliese del pueblo empezarían a excavar allí los dueños, me creo en el deber de comunicar estos datos a esa Junta a fin de que acuerde lo que juzgue más acertado*. A raíz de ello, el Marqués de Cerralbo, presidente de la Junta Superior de Excavaciones, enviaría un informe al Gobernador Civil de Jaén, dejando patente la dificultad que había en aplicar la novedosa ley de 1911, que a partir de esta fecha, al igual que ocurriría con Despeñaperros, quedaría al libre albedrío de sus propietarios, de expoliadores y coleccionistas anónimos. Incluso en 1920 sería denunciada la venta de exvotos procedente de Castellar en Oviedo. Se realizaría el decomiso del conjunto de bienes y se inició un expediente a Román Pulido, su propietario que declaró en 1925<sup>2759</sup>.

### 5.3.7. El procedimiento sancionador.

A pesar de la libertad de disposición, con una limitación exigua que se le proporciona al propietario, se establece un verdadero procedimiento sancionador, que regula el Reglamento en los siguientes casos: 1º) En caso de que los poseedores de antigüedades autorizados por el Estado no redactara el inventario, podrá ser declarado de ocultación, que deberán de ser apreciada por una Comisión de académicos de números de las Reales Academias de Madrid (art.20 de Reglamento). 2º) En caso de que las exploraciones no fuesen autorizadas, los particulares estarían sujetos a responsabilidad, indemnización y pérdida de las antigüedades descubiertas, así como los que oculten, deterioren o destruyan ruinas o antigüedades. La indemnización a pagar será establecido por el Estado, o bien el comiso (art.22 del Reglamento).3º) Se podría anular las concesiones de autorización a particulares y Corporaciones para hacer

<sup>2758</sup> LANTIER, R. CABRE, J. *El santuario ibérico de Castellar de Santisteban*. Memoria de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas Prehistóricas. Madrid, 1917.

<sup>2759</sup> CALVO Y CABRE, *Excavaciones de la cueva del Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)*, Madrid, 1917.

excavaciones en terrenos públicos o particulares, por causa grave, siempre que lo disponga el Tribunal establecido por la Ley (art. 23). Muy progresista es la inclusión de que los trabajos que no se practiquen de modo científico, se considerarán causa grave, en un momento en que muchas excavaciones arqueológicas seguían siendo productos de aficionados.

#### **5.3.8. La confección de un Inventario.**

Una de las medidas más importante de la Ley fue el encargo que se la hacía a la propia Junta de Excavaciones de elaborar un inventario de las ruinas monumentales y de las antigüedades. En el artículo 3º de la Ley se daba prioridad en esta labor al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, encomendando a un cuerpo facultativo, bien procedente de las Academias, bien del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, o bien de los catedráticos de las universidades de aquellas asignaturas que tuvieran relación con la exploración.

#### **5.3.9. La aplicación del presupuesto público en las excavaciones arqueológicas. Los premios en metálico.**

Una de las novedades que iría aportar la ley de 1911 fue la asignación presupuestaria para realizar excavaciones arqueológicas, ante la carencia de fondos que se había tenido que enfrentar el Gobierno en un gran número de ocasiones. La distribución del crédito sería propuesta por la Junta de Excavaciones, y De esta manera se irían promulgando anualmente unas disposiciones legales sobre la atribución presupuestaria que el Estado debía de destinar para realizar excavaciones arqueológicas, donde se incluían los nombres de las personas responsables de las mismas, acompañada de cuantía que se le asignaba. En la asignación estaban incluidos los gastos de expropiaciones e indemnizaciones, dietas y demás gastos que ocasionen las excavaciones, mientras que las dietas y viajes de los Delegados Directores se regulasen conforme a lo establecido en la Real Orden de 11 de febrero de 1911. Las primeras disposiciones que fueron promulgadas en torno a la asignación presupuestaria serían la **Real orden de 10 de junio de 1915** relativa a la distribución del crédito consignado en el Presupuesto para excavaciones, la Real orden de 28 de febrero de 1917 en la que se aplica la partida presupuestaria según establece la ley de 7 de julio de 1911 para continuar las excavaciones arqueológicas bajo los auspicios del Estado y la **Real orden de 12 de abril de 1918** resolviendo la propuesta de la Junta de Excavaciones y Antigüedades, respecto a la distribución de los créditos consignados en presupuestos para excavaciones oficiales. Se puede apuntar que una gran parte de la asignación presupuestaria concedida por la Junta recaería en el arqueólogo José Ramón Mélida, bien por dirigir las dos excavaciones más importantes de la época, Numancia y Mérida, bien por la amistad que tendría con el resto de los miembros de la Junta. La concepción de premios a los particulares y Corporaciones Públicas por las excavaciones arqueológicas

realizadas había sido una práctica habitual en torno a la Real Academia de la Historia desde la etapa isabelina, pero en con la promulgación de la Ley de 1911 quedaría definitivamente reglada, por lo que de esta manera se incitaba a la práctica arqueológica de manera científica. En el artículo 11 de la Ley y 25 del Reglamento se dispondría que el Estado concediera cada tres años dos premios en metálico y uno honorífico a los tres exploradores que hubieran logrado descubrimientos de mayor importancia, a juicio de una Comisión calificadora.

## **6. La construcción jurídica del Patrimonio Inmobiliario de interés histórico y artístico como bien de interés público: Monumento Nacional y Monumento Nacional Arquitectónico y Artístico.**

### **6.1. El despertar de la conciencia patrimonial del Patrimonio Inmobiliario de interés histórico y artístico.**

#### **6.1.1. La enajenación del Patrimonio Inmueble Monumental a principios del siglo XX: Un supuesto derecho inherente al propietario.**

Durante los primeros decenios del siglo XX la adquisición de bienes inmuebles de interés histórico y artístico se convertiría en una práctica frecuente en el ámbito español, especialmente entre la arruinada nobleza española y los ricos burgueses norteamericanos.

El patio del Castillo de Velez Blanco sería adquirido en 1905 por Colbert, coleccionista de París, en la cantidad de 80000 pesetas. Una vez llevado a Marsella y sin llegar a ser desembarcado, sería adquirido por el millonario americano Georges Blumenthal, quien lo trasladó a Nueva York, instalándolo en su casa particular de Manhattan. A su muerte pasaría sus bienes al Metropolitan Museum de Nueva York, que trasladaría el patio a su sede central en la Quinta Avenida, donde actualmente se conserva<sup>2760</sup>. En 1904 fue adquirida la Casa de Zaporta (Zaragoza) por un acaudalado francés, m. Shutz, con la intención de reconstruirlo en su mansión parisina. La situación en que se encontraba el inmueble era lamentable, a pesar de que la Comisión de Monumentos había propuesto que fuera adquirida por el Estado, que desgraciadamente no lo hizo, por lo que abrió el camino para que se perdiera esta magnífica construcción gótica. Sin embargo, una circunstancia inesperada, el inicio de la guerra mundial, impediría que Schutz, pudiera trasladar las piezas ya desmontadas del palacio a su tierra natal, por lo que definitivamente sería adquirido por la Caja de Ahorros de Zaragoza (hoy Ibercaja). Un gran número de palacios serían destruidos por la propia autorización municipal, como fue el caso del Palacio del marqués de Ciudadilla (Lérida), o en 1910 el histórico Palacio arzobispal de Burgos, que fue derruido por el insigne

<sup>2760</sup>ESPIN, J. “El Alcázar de los Vélez, un monumento que nos quita”, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, 1904, pp.101-103 y 134-135; GAYA NUÑO, Juan Antonio, 1961, pp.287-290; LENTISCO PUCHE, José *El castillo de Vélez Blanco, 1506-2006, Imagen y memoria*, Almería, Centro de Estudios Velezanos, 2007; RAGGIO, Olga “El patio de Velez Blanco, un monumento señero del Renacimiento”, *Anales de la Universidad de Murcia*, Volúmen XXI, 1964.



arquitecto, Vicente Lampérez, con el pretexto de que sus trazas se oponían al goticismo de la catedral. En 1917 se autoriza la demolición de la Casa de los Landecho o en 1920 el palacio de Ugena (Toledo), derribado por un labriego, que contaría con el apoyo oficial del propio Ayuntamiento e incluso con el respaldo de las Reales Academias. En muchas ocasiones las piezas de los edificios eran repartidos por los propios vecinos como ocurrió en el caso de la iglesia de San Esteban de Gormaz, o bien eran vendidos a buen precio. De esta manera el propietario de la abadía de Labanza (Palencia), permitió enajenar sus bellos capiteles, hoy situado Fogg Art Museum de Cambridge (USA)<sup>2761</sup>. El escultor norteamericano George G. Barnard adquiriría en Cataluña y Castilla algunos claustros románicos, como el de San Miguel de Cuxá, abriendo un museo privado en 1914, para posteriormente pasar en 1925 al Metropolitan Museum de Nueva York, en 1925. Otras veces sus propios propietarios al no poder mantener sus palacios los vendían por un módico precio, como ocurrió en el caso del Palacio de Altamira en Santiago de Compostela, vendido por el precio de 80.000 pesetas.

#### **6.1.2. La actitud crítica de los arquitectos ante la conservación de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico.**

*- La revista Arquitectura como defensa del Patrimonio Monumental a principios del siglo XX. Torres Balbas.*

La revista Arquitectura se convierte en un vital instrumento de debate de la ideología estética de la arquitectura española de comienzo de siglo, así como un foro de defensa del patrimonio histórico-artístico español que como hemos indicado en páginas más arriba, estaba viviendo una nueva etapa de despojo. En 1918, el arquitecto Ricardo García Guereña en su artículo titulado *Los Mutiladores* publicado en la revista Arquitectura, denunciaba la inoperancia del cura párroco en la conservación del patrimonio eclesiástico: *El más implacable enemigo que estos monumentos han tenido es el cura párroco o ecónomo que lo ha regentado; y no por afán de hacer mal, que nunca les movió tal fuerza, sino por desconocimiento, por incultura y por posponer todo a las necesidades del culto y comodidades de sus servicios (...)*<sup>2762</sup>. A comienzo del siglo el arquitecto Leopoldo Torres Balbás lamenta la pérdida monumental que estaba padeciendo la cultura española, destacando *el desdén existente hacia los recuerdos del pasado que constituyen la conciencia histórica de todos los pueblos civilizados*. En innumerables artículos denunciaría un gran número de monumentos arquitectónicos perteneciente al románico aragonés. En la revista *Arquitectura*, el arquitecto granadino publicaría *Monumentos desaparecidos: Mientras que en otros países hay un deseo de ordenación y reparación respecto a todo lo incompleto y deteriorado (...) en España parece complacernos vivir entre ruinas, contemplando jaramagos y hiedras. Las obras de arte, los monumentos que nos dejaron anteriores*

---

<sup>2761</sup> E.T. "El Museo de Boston se enriquece con unos capiteles españoles", en *Arte Español*, 1928, p.372.

<sup>2762</sup> GARCIA GUEREÑA, Ricardo "Los mutiladores" *Arquitectura*, 1918, p.89.

generaciones, van desapareciendo en gran número ante la indiferencia del Estado y de la Iglesia, la codicia de las corporaciones y particulares, la incultura del pueblo y el celo, mal orientado con frecuencia, de los arquitectos restauradores<sup>2763</sup>. Hacia 1920 publicaría en la revista *Arquitectura* un magnífico artículo titulado *La utilización de los monumentos antiguos*, lamentándose del destino de los bienes inmuebles de carácter histórico-artístico en el ámbito español: *Muchos de nuestros antiguos monumentos siguen utilizándose en aquel servicio para el que fueron construidos hace siglos. El ambiente que les rodea parece haberse conservado inmutable, y por ello podemos gozarlos más plenamente que los transformados por la acción del tiempo o los cambiados de destino. Entre ellos figuran gran cantidad de iglesias, muchos monasterios para los cuales parece no haber transcurrido el tiempo, numerosos edificios en los que se albergan instituciones y necesidades varias veces seculares. Otros monumentos antiguos, sin utilización alguna en nuestros días, yacen abandonados, en ruinas, excepto en aquellos escasos pueblos, tan ricos, inteligentes y amantes de su antiguo arte o de su historia que lo conservan cuidadosamente. Tales los acueductos, teatros y circos romanos, los recintos fortificados, los castillos, los puentes que no se utilizan actualmente. Innumerables iglesias y monasterios arruínase también en total abandono, ya que el número de los que existen es muy superior al que reclaman las necesidades religiosas de nuestros días. Otros monumentos, finalmente, sirven para albergar gentes y necesidades muy diversas de las en que se emplearon al levantarse: palacios antiguos, viviendas hoy en día de gentes humildes; monasterios vendidos cuando la desamortización y convertidos en casa de labor; pósitos utilizados como escuelas; iglesias que son hoy paneras o fábricas de harinas. El caso más conocido y vergonzoso es el de la vieja catedral de Lérida, magnífico edificio de gran interés artístico, convertida en cuartel desde hace algunos años, a pesar de estar declarado monumento nacional (Real orden de 12 de junio de 1918). El edificio del convento de San Marcos de León, está repartido actualmente entre el Museo Arqueológico y la Remonta militar<sup>2764</sup>. A continuación critica la actitud del Gobierno ante la situación del patrimonio histórico-artístico español: *Pero no solamente el tiempo cambia el destino de los edificios conforme a nuevas necesidades y va dejando que se arruinen los que por no utilizarse parece que han perdido su razón de existir. Tal hecho es fatal, y el hombre tan solo puede mitigar la acción destructora de los años y de las nuevas generaciones. También a ella contribuyen el Estado y los elementos oficiales que le sirven y representan, divorciados casi siempre de todo sentimiento artístico. La mayoría de los monumentos que se restauran, es decir, que se rehacen, no se les reintegra a su anterior destino y se les deja desnudos, solitarios y fríos, echándoles las llave y poniéndoles un guardián que los enseñe y vigile. Así están bastantes de los clasificados como nacionales: recordemos, entre ellos, la basílica visigoda de San Juan de Baños; las iglesias asturianas de Naranco, Lino y Lena; la mozárabe de Escalada; las románicas de San Martín de Frómista y San Juan de Duero, en Soria; la ermita del Cristo de la Luz, en Toledo; los monasterios de El Parral, de el Paular, de Poblet. Al mismo tiempo expone con una perspectiva muy moderna, anticipándose en el tiempo, la utilidad práctica que podía tener el monumento histórico-artístico, superando la concepción de**

<sup>2763</sup> TORRES BALBÁS, L., "Monumentos desaparecidos" *Arquitectura*, 1918, p.23.

<sup>2764</sup> TORRES BALBÁS, Leopoldo, "La utilización de los monumentos antiguos". *Arquitectura*, III. Madrid, 1920.

ser simplemente una reliquia del pasado: *Es la tendencia odiosa a apartar de la vida las cosas bellas y encerrarlas en un museo en donde se cataloguen debidamente. Puesto que los edificios antiguos no pueden ser trasladados a un monumental museo, como desearía muchas gentes, se le aísla derribando las construcciones que les rodean, se le cerca con una verja de hierro con su correspondiente candado y se le priva de su destino. Conviértense así en obras muertas, perdiendo su contacto con la vida cotidiana y desintegrándose del ambiente en que se encuentran. Sus recintos vacíos, sus grandes muros desnudos, semejan los de una cárcel. ¡Cómo no recordar la impresión de tristeza y de frialdad que producen esas iglesias restauradas y sin culto que han quedado apartadas, al margen de la vida de la ciudad o lugar en que se hallan! (...) Un edificio se ha hecho para ser habitado por el hombre o por la divinidad (...) El interés de su conservación reside también en ello (...) Un edificio habitado, además, no se destruye como uno solitario. Si en los monasterios de El Paular y de El Parral hubieran seguido sus congregaciones, contemplaríamos las obras de arte que de ellos fueron arrancadas y no estarían hoy arruinadas. En general encontrar en nuestras villas edificios antiguos cerrados y abandonados, en camino de destruirse, de gran capacidad, que con un pequeño arreglo podrían servir para alojar escuelas o necesidades de interés público que ocupan actualmente locales casi siempre en malísimas condiciones.(...) Procuremos también que cada edificio, en lo posible, siga adscripto al mismo destino para el que se construyó. Que en las iglesias se verifiquen las ceremonias de culto, que en los monasterios continúen los cánticos religiosos, que en los palacios prosigan las fiestas y recepciones, que por los puentes antiguos siga pasando el tráfico moderno. Y cuando tal cosa no sea posible, démosles un destino de movimiento y animación en el que sus puertas y ventanas estén siempre abiertas al sol y al aire de la calle, a toda la intensidad de nuestra vida actual. Los arquitectos José y Javier Yáñez Larrosa denunciarían con un cierto matiz nacionalista la destrucción que se estaba produciendo en estos años: *Pese a reconocer las “dificultades y deficiencias de la restauración”, las prefieren a ese espectáculo deprimente que Andalucía y ambas Castillas nos ofrecen, dejando derrumbarse, cuando no entregado a la codicia de chamarileros y anticuarios (...)*<sup>2765</sup>*

**- La conferencia de 1919 del arquitecto Jerónimo Martorell en el Ateneo de Madrid.**

Jerónimo Martorell en su conferencia *El patrimonio artístico nacional*, pronunciada en 1919 en el Ateneo de Madrid, y publicada en la revista *Arquitectura*, denunciaría algunos de los expolios más significativos que se darían en esta etapa: la desaparición de la techumbre mudéjar de la Casa de la Judería de Teruel; la caída y los destrozos de las arcadas ojivales del Castillo del Rey en Pollensa (Mallorca); las ventas fraudulentas de la casa de Zaporta de Zaragoza, la pintura de la Adoración de los Reyes, de Van der Goes, o los derribos del Castillo de Alacuas (Valencia) y del Corral de Carbón (Granada). La radiografía de la situación era escalofriante: *caen abandonados edificios monumentales antiguos; el oro yanqui adquiere, los anticuarios se llevan de las casas*

---

<sup>2765</sup> YARNOZ LARROSA, José y Javier “La restauración del Palacio Real de Olite” *Arquitectura*, N° 65, Madrid, septiembre de 1924, pp.242-292.

y de los templos detalles arquitectónicos y esculturas, pinturas y tapices, objetos de orfebrería, arquetas, muebles, miniaturas, todo género de obras de arte... para aminorar esta mengua se precisa un gran cambio en la ideología española respecto al concepto de lo que se entiende por monumento nacional y en cuanto a los principios legales y métodos que deben adoptarse para su salvaguardia<sup>2766</sup>. Su rechazo al aparato institucional del Patrimonio Monumental sería evidente, especialmente en lo referente a las Comisiones Provinciales de Monumentos, quien estimaba que a pesar de que se había modernizado su reglamento, faltaba una renovación de los miembros que las componían: *Se trata, generalmente, de comisiones de simples aficionados, sin preparación concreta para la compleja misión que les ha sido encomendada; los perjuicios públicos llegan a estas juntas, amparados por la honorabilidad de sus miembros; sus resoluciones son muchas veces incoherentes. Las Comisiones Provinciales de Monumentos no tienen relación alguna con el Catálogo, que ha de ser base esencial de toda actuación en la materia. Es esto una anomalía inverosímil; el Catálogo de Madrid, sin organismo que lo aplique; las Comisiones encargadas de aplicarlo, sin catálogo. Para que en España el Servicio de Bellas Artes sea eficaz, ha de fundamentarse en realidades vivas, en las zonas geográficas e históricas y en el reconocimiento de las capitalidades artísticas. La provincia sólo tiene fines administrativos; carece de atribuciones de gobierno, de recursos, de capacidad científica. Hay que sustituirlas por Mancomunidades o Diputaciones Generales de región, dotándolas de facultades y medios para realizar los altos fines que le competen*<sup>2767</sup>. Al mismo tiempo se referiría al problema del escaso presupuesto invertido por el Estado y su mala gestión: *La mayor parte de las cantidades que dedica el Estado a la reparación de los llamados hasta ahora monumentos nacionales, se emplean con fines que nada tienen que ver con su conservación: se dedican a realizar proyectos de fantásticas reconstrucciones, que sería interesante ver en el teatro representadas por la escenografía pero no en la realidad. Fácilmente, con reducidos medios económicos pueden conservarse los monumentos escultóricos; basta en muchas ocasiones componer tejados, conducir bien las aguas de la lluvia para que no se perjudiquen los cimientos, reparar grietas, reforzar elementos debilitados. Así se salvarían muchos monumentos*<sup>2768</sup>.

#### - Los Congresos de Arquitectura.

En el IV Congreso Nacional de Arquitectura celebrado en agosto de 1907 en Bilbao, el arquitecto Vicente Lampérez presentaría la ponencia titulada *Bases y medios práctico para hacer el inventario de los monumentos arquitectónicos de España*, a la que se uniría la defendida por Cabello Lapiedra, en el V Congreso Nacional celebrado en Valencia en junio de 1909, sobre la *Reglamentación de los Servicios de Arquitectura que dependan del Estado*, solicitando la creación de un servicio especial de Monumentos Nacionales. Por su parte, el V Congreso Internacional de Turismo, celebrada en España en 1912, abordaría la cuestión, en una de los bloques temáticos bajo la

<sup>2766</sup> MARTORELL I TERRATS, Jerónimo “El patrimonio artístico nacional” *Arquitectura*, Núm.14, 1919, p.155.

<sup>2767</sup> MARTORELL, Jeroni , 1919, p.154.

<sup>2768</sup> MARTORELL, J. , 1919, p.154.

denominación de *La Conservación de los monumentos arquitectónicos y de la riqueza artística como medio de atraer el turismo y a la catalogación y defensa de este patrimonio*, interviniendo el propio Lampérez, que nuevamente expondría en 1913 con motivo del Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, la ponencia la Restauración de los Monumentos Arquitectónicos.

Entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre de 1919 se celebraría el VIII Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en Zaragoza, donde nuevamente se plantearía el problema de la conservación del patrimonio en el plano legislativo, destacando especialmente la intervención de Leopoldo Torres Balbas, con la ponencia titulada *Legislación, Inventario Gráfico y Organización de los Monumentos Históricos y Artísticos de España*, quien abordaría definitivamente el tema en cuestión<sup>2769</sup>. La exposición comenzaría con una crítica del patrimonio arquitectónico nacional, para pasar a centrarse en los problemas inherentes que conllevaba toda restauración monumental, especialmente en un tema candente en este momento, como era los modelos de restauración que debía ser utilizado por los arquitectos. Las páginas que más nos interesa en este trabajo serían las referidas a la organización administrativa tutelar del Patrimonio Monumental, al poner una puesta al día del panorama legislativo, el personal técnico, el presupuesto y el inventario, que en este momento eran objeto de discusión tanto académica como incluso política, y que el insigne arquitecto no dejaría de añadir unas dosis de crítica, para lo que propondría una nueva visión sobre la tutela patrimonial, que debía de pasar no solamente por una estructuración administrativa sino principalmente por la promulgación de nuevas medidas legislativas, imitando a las tomadas por la legislación italiana, que se centrarían especialmente por la defensa del límite de la propiedad privada: *Al ser la conservación de los monumentos históricos y del patrimonio artístico empresa de utilidad pública e interés nacional, impónese la promulgación de medidas de protección legislativa en beneficio de la colectividad que, restringiendo el disfrute de la propiedad, impidan su destrucción o su emigración. Las actuales leyes españolas, tiene escasa eficacia para ello; únicamente la de Excavaciones y Antigüedades limitan el derecho de propiedad en lo que se refiere a tales extremos. Algunas naciones europeas poseen una legislación protectora muy completa que puede servirnos de modelo: Italia es la que ha dictado disposiciones más radicales en defensa de sus monumentos antiguos. Francia, en su ley de 31 de diciembre de 1913, se ha inspirado en gran parte de las italianas y ha completado con ello una serie de medidas muy eficaces. La novedad más importante radicaba en establecer la declaración de utilidad pública de las obras de arte inventariadas, que incluso podía llegar hasta la expropiación, aunque matizaba su carácter al considerar que tal declaración autorizaba a priori*

---

<sup>2769</sup> ISAC, Angel La ponencia de D. Leopoldo Torres Balbas en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos de 1919, *Cuadernos de Arte*. Universidad de Granada, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1989, pp.195



*la servidumbre de interés artístico de la clasificación que no es más que una expropiación radical y no afecta a los intereses privados más que en lo estrictamente necesario a las exigencias de interés general y es por ello mucho menos onerosa que la expropiación total. Tal es el alcance de la reciente ley francesa que confía a los tribunales de justicia la fijación de la indemnización representativa del perjuicio causado. Al mismo tiempo pediría la enajenación al exterior de los inmuebles que en este momento se había convertido en una práctica normal en el ámbito del coleccionismo internacional en nuestro país: Deben también prohibirse, como en Italia, que esas obras salgan de nuestro suelo, permitiéndose únicamente ventas y cambios dentro del país, siempre con la autorización del Estado.* La exposición acabaría exponiendo el problema inherente de la organización administrativa del Patrimonio Monumental en España.

## **6.2. La pervivencia de la Declaración de Monumento Nacional a principio del siglo XX como instrumento tutelar administrativo del Patrimonio Inmobiliario Monumental.**

### **6.2.1. La inoperancia de la declaración de Monumento Nacional como instrumento tutelar del Patrimonio Monumental Inmueble.**

¿Qué tutela específica representa el hecho de ser un bien inmueble declarado por el Estado Monumento Nacional de interés histórico y artístico?. Como en las etapas anteriores, al no existir regulación específica sobre este bien jurídico, se tachaba a la misma su carácter ambiguo, incluso se achacaba la inexactitud a la hora de seleccionar estos bienes para ser declarados como tales, ya que algunos edificios de indiscutible valía como la Catedral de Sevilla tuvieron que esperar varios años para que fueran declarados como Monumento Nacional. La falta de una clara regulación jurídica sobre la declaración de Monumento Nacional nuevamente abriría el debate sobre su significado jurídico así como su repercusión en la institucionalización administrativa del Estado. Rodrigo Amador de los Ríos denunciaría en 1903 la inoperancia de las declaraciones, que lo calificaría como patentes de destrucción sin responsabilidad, ya que aunque el Estado estaba obligado a su mantenimiento y restauración, fue incapaz de realizar una verdadera política de tutela pública de estos bienes, por lo que en muchos casos quedaron incluso abandonados. No hubo tampoco un criterio razonable a la hora de calificar a un bien como Monumento Nacional, por lo que como apunta José María Calama las declaraciones quedarían viciadas, declarando monumentos de interés menor, muchas veces presionados por intereses partidistas y dejando atrás a la confección de un verdadero plan de catedrales que hubiera sido primordial en este momento. Sería repetitivo señalar la falta de fondos económicos para afrontar las distintas medidas de conservación que se pudieron haber realizado en estos años<sup>2770</sup>. Torres Balbas ya criticaría la distinción en la categoría jurídica del bien inmueble a proteger en el VIII Congreso de Arquitectos

<sup>2770</sup> AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo “Los monumentos nacionales”, en la *España Moderna*, abril, pp.30-64.

celebrado en Zaragoza en 1919: *Ninguno de los organismos que el Estado utiliza en el servicio de los Monumentos, tiene facultad para determinar los edificios españoles que deben ser clasificados como nacionales y por ello puestos bajo la directa salvaguardia de aquél. Es la iniciativa de corporaciones o particulares la que solicita del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, esa categoría de los que cree interesantes, y éste previo informe favorable de las Reales Academias de San Fernando y de la Historia, así lo acuerda mediante Real Orden. Figuran clasificados como Monumentos Nacionales en 1º de febrero de 1919, 128 edificios, partes o conjuntos de ellos. En Francia eran 880, en 1840; 1534, en 1862; en 1702, de 1887 a 1900; 3684, en 1913. En ocho años, de 1906 a 1913, fueron clasificados 1865 edificios. La otra categoría de monumentos que reconoce el Estado, los arquitectónicos-artísticos, son declarados tales a petición también de cualquier Corporación o particular y previo el informe de las Reales Academias. Muy poco son los incluidos en el catálogo que de ellos lleva la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Al carecer de iniciativa el Estado para su clasificación, limitándose únicamente a informe sobre las peticiones alejadas o ajenas a él, resulta que se hace a capricho, sin una verdadera sistematización rigurosa, imprescindible en este servicio. Es casi siempre un interés local el que mueve a particulares o corporaciones a pedir la inclusión de un edificio en sus listas y aunque las Academias en sus informes procuren mantener un criterio equilibrado y rechazan muchas demandas, el vicio del sistema no se evita. Así, entre 128 Monumentos clasificados como Nacionales, los hay de un interés capital en nuestra historia artística entre otros muchos de escaso valor científico y artístico si se lo compara con bastantes no incluidos. En el debate del Senado de 22 de mayo de 1909 el senador Serrano presentó una exigua lista de 89 edificios que habían sido declarados hasta la fecha como Monumento Nacional, dejando en entredicho la acción del Gobierno por la corta asignación presupuestaria que había sido destinada a tutelarlos, por lo que vendría a afirmar que: este título que se confiere a nuestros monumentos sirve de muy poco, debiendo servir de mucho (...). En la réplica, el Ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro puntualizaría que no se precisaba ser declarado Monumento Nacional para que un bien inmueble de interés histórico y artístico sea protegido: *No se necesita que a tal declaración para que un monumento realmente merezca respeto, atención, reparación y conservación continuos, para que podamos seguir considerándolo como uno de los timbres de gloria de nuestro país, porque esa declaración se ha hecho bien siempre a medida que una necesidad apremiante la ha hecho precisa y ha hecho determinar si había la incuria suficiente para pensar si el monumento de que se trataba mereciese el ser calificado de tal, para llamar sobre él, singularmente la atención del Estado; y esto explica que aquellos monumentos que de suyo estaban bien cuidados, no hubieran necesitado de esta declaración.**

En la lectura de los informes de los académicos de la Historia y de Bellas Artes, podemos encontrar a su vez un gran número de desestimaciones a la hora de ser declarado un bien como Monumento Nacional. Es muy significativo el informe elaborado por Juan Catalina García y López, donde se precisa las causas por las que han sido negada la declaración del inmueble. En

principio podemos apreciar la carencia formal a la hora de presentar el informe ya que viene *la demanda en absoluto escueta, sin antecedentes históricos de ninguna especie, sin dibujos, fotografías, planos y alzados. Ni aún siquiera consta a quien pertenece el edificio, ni su estado de conservación.* Incluso el hecho de no constar la suficiente base histórica del edificio podía también producir un rechazo de la Academia: *La Academia puede y aún debe investigar cuanto toca a la historia de los monumentos, pero sin verlos, sea a vista de ojos, que fuera lo mejor, sea con auxilio de láminas y planos, no está en condiciones de informar con acierto sobre el interés artístico y arqueológico de los edificios. Puede suceder que acerca de ellos se haya escrito y que se haya escrito bien: que existan libros, láminas y fotografías, pero esto no basta sino son de ahora para conocer y apreciar el estado presente y declarar si merecen o no el dictado de nacionales, y las ventajas y preferencias que va aneja a esta declaración por ministerio de la ley.* Y añadía un punto importante a la hora de entender el sentido jurídico de tutela pública ya que incluso teniendo un valor histórico el inmueble podía la Real Academia de la Historia apreciar, como en el caso del Palacio de Torrijos, que no era suficiente su importancia para ser declarado como Monumento Nacional: *(...) de las noticias que de él tiene en el orden histórico, no es tan alta que merezca la susodicha declaración y lo mismo sucede cuando lo decoran una bella portada y excelentes artesonados, no son suficientes estos elementos para merecer tan singular honra, como la merecen otras insignes construcciones que ya la alcanzaron y muchas que la esperan con mayor justicia que el palacio de Torrijos.* Por lo que se llega a afirmar en el Informe, como en otras ocasiones haría, de que solo deben ser declarados monumentos nacionales aquellos que por su interés histórico eminente, por representar de un modo especial y soberano un aspecto del arte y por ser urgentísimo el arrancarlos de grandes riesgos y quizás de la destrucción, recaban por derecho propio una honra que la ley no concede a toda clase de monumentos.

Paradójicamente uno de los inmuebles más relevantes de la historia de la arquitectura española, la Real Cartuja de Miraflores, tuvo dificultad a la hora de ser declarado como monumento nacional, no consiguiéndose hasta la Real Orden de 5 de febrero de 1923. En el Informe que fue presentada por el académico de la Historia, Fernando Villamail el 20 de noviembre de 1916 se resumía los grandes valores históricos y artísticos que reunía el inmueble, al mismo tiempo que recogía las vicisitudes que había pasado a lo largo del siglo XIX, haciendo especialmente referencia al cambio de su régimen dominal, pasando a ser propiedad de la Iglesia: *Pasada la tormenta, volvieron los monjes a la despojada Cartuja en 1814, y cuando con gran dificultad y penuria iban restaurando el casi derruido convento y recobrando algunas de sus antiguas joyas, de nuevo volvieron a correr por Miraflores días de luto y de desamparo que, con varia fortuna, acabaron por reducirlo a simple museo provincial, en cuyo destino hubieran corrido la suerte de otros muchos, si un arzobispo de Burgos, dolido de la triste suerte que esperaba al monumento, sin protección eficaz y sin vigilancia, no hubiera empleado su influencia personal con los poderes públicos para rescatarlo de aquella situación precaria, obteniendo del Estado la cesión de todo el monasterio, que quedó desde abril de 1864 patrimonio de la mitra de Burgos. Así se salvó del peligro que le*

*amenazaba, cuando ya se hallaba tan acometido por el despojo y por las ruinas. Pero a la obra del Sr. Puente y Primo de Ribera, con ser tan importante, faltaba otra que ejecutó su sucesor D. Anastasio Rodrigo de Yusto, el cual, en el año de 1880 restableció la Cartuja a sus antiguos moradores y dueños que, con la ayuda del arzobispo, el concurso de los fieles y la ayuda de los amantes de las glorias burgalesas, fueron reedificando el convento. Proseguiría el informe resaltando que el Estado respetara la identidad del edificio: Hoy, el edificio del convento, sin aquellos muebles y aquellos cuadros que lo enriquecieron en los pasados siglos, desnudo y sin ornatos artísticos, se halla bien conservado por los laboriosos cartujos, que emplean en repararlo su trabajo personal (...). Por eso la Ponencia al afirmar (...) que la iglesia y capilla de la Cartuja de Miraflores constituyen un monumento nacional desearía que si el Estado se decide hacer esta declaración en la Gaceta, lo haga en términos en que deje a salvo la conducta dignísima de los arzobispos de Burgos, que desde hace cincuenta años lo han tenido bajo su custodia y a los cuales se debe el que se haya salvado del espantoso naufragio en que han perecido tantos y tan admirables monumentos españoles, oficialmente declarados como tales. Sin embargo, un voto particular en el seno de la Real Academia de la Historia, la del Barón de la de la Vega de Hoz, se dejaría sin efecto la declaración citada, promulgada en la Real orden de 12 de enero de 1917 e insertada en la Gaceta del 2 de febrero del mismo año, cuya causa sería expuesta en una Adición anexa al Informe por el que extrañamente afirmaba que el edificio estaba perfectamente conservado por el Arzobispado y la Comunidad y por ello Estado no tenía que ayudar en este momento en su estado de conservación, más aún cuando contaba con muy escasos recursos para ello, por lo que no debía aumentar innecesariamente las obligaciones contraídas, por lo que podía suspenderse la declaración oficial que se solicita, hasta el momento en que se alteren o desaparezcan las favorables condiciones en que hoy se encuentra la maravillosa Cartuja de Miraflores.*

Unos meses después, el 18 de diciembre de 1916, la Comisión de Monumentos emitió un informe por el que se precisaba que *la Cartuja de que se hace mérito necesita al presente de ayuda y protección inmediata del Estado, si ha de conservarse y evitar la sensible y lamentable desaparición de tan valiosa joya artística, no obstante la atención que les sigue prestando la diócesis*, por lo que se volvería a considerar la petición de la declaración del inmueble como Monumento Nacional. Para ello se daría un nuevo trámite administrativo como expone la Real Orden de 1923, por el que se tuvo en cuenta que 1º) El informe de la Academia de Bellas Artes de San Fernando presentado anteriormente había sido dictado por unanimidad, y *que el voto particular de la Academia de la Historia fue desechado por ella misma por mayoría de votos, sin que en realidad de verdad signifique el citado voto particular una discrepancia de fondos, pues sólo se refiere a la oportunidad del momento en que debe hacerse la declaración de monumento, por lo que figura como una adición;* 2º) Que por Real orden de 15 de febrero de 1917, explicativa de haberse omitido en la Real Academia de San Fernando al resolverse la suspensión y dando gracias a ella y a la de la Historia por su intervención en el expediente de que se trata, se especificaba terminantemente

en los fundamentos de dicha soberana disposición, no ser ésta declaratoria de derecho y sí solo de procedimiento y conducta meramente ministeriales, por lo que sólo se citó el testimonio de la Real Academia de la Historia en la Real Orden de 12 de enero de 1917 y 3º) *Considerando que la petición actual de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de Burgos aporta razones que exigen proseguir un expediente del que sólo resultó una suspensión, que gramaticalmente no quiere decir otra cosa que un estado transitorio, por lo que es reformable en el orden ministerial administrativo la resolución que a tal efecto fue dictada;* y 4º) *Considerando que entrañaría una redundancia inútil el pedir nuevos informes a las Reales Academias, aun a la de la Historia, puesto que el voto particular fue desechado por ella misma y no afecta al fondo del dictamen,* sería declarado Monumento Nacional por Real Orden de 5 de noviembre de 1923, aunque solamente referente a la iglesia y a las capillas, excluyendo del mismo el monasterio y las demás dependencias de los Cartujos. En la misma se especificaba que el inmueble quedaría bajo *la tutela del Estado y la inmediata inspección de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Burgos, debiéndose por el Registro de la Propiedad donde se halle inscrito el citado Monasterio hacerse la anotación marginal relativa a la declaración de monumento nacional, que por esta Real orden se declara.*

**En el Informe de la Real Academia de San Fernando de Madrid de 8 de junio de 1922** sería desestimado que fuera declarado monumento nacional el castillo de la Aguzadera (Casariches, Sevilla), fundamentado en la falta del valor artístico, incluso matizando que el estado ruinoso en que se encontraba el propio castillo no era exclusivo de este inmueble ya que en la misma situación se encontraba un amplio número de recintos fortificados que el Estado no podía conservar por falta de presupuesto: *Esta Academia tiene un verdadero sentimiento al manifestar que, a pesar de lamentar el estado ruinoso del castillo, y que requiere obras urgentes para que no desaparezca totalmente, no le sea posible aconsejar a la Superioridad su declaración de Monumento Nacional por la falta de interés artístico (...) En el mismo estado y necesitados de obras de reparación están la mayoría de tantos castillos como existen en España, y no es posible declararlos monumentos nacionales a todos los que como el de Aguzadera no tienen verdadero interés artístico o histórico*<sup>2771</sup>. La exaltación del valor nacional vuelve a ser reivindicado en la declaración como monumento nacional de algunos bienes inmuebles, como fue el caso de la Puerta del Carmen de Zaragoza, que en los informes de las Reales Academias se exalta el sentido patriótico como fundamento. La prevalencia de lo artístico sobre lo histórico quedaría resaltado a su vez en el Informe del 16 de diciembre de 1907 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: *La declaración de nacional tan honrosa como apetecida, se atribuye a los monumentos por su importancia artística o arqueológica o por su representación histórica, por ambas cosas a la vez. En el segundo concepto no ha sido muy prodigada dicha declaración, salvo en casos tan singulares como las ruinas de*

<sup>2771</sup> *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Madrid, 31 de marzo de 1922, Tomo XVI, Núm.61, p.145.



*Numancia, la iglesia de Santa Teresa de Avila, el Monasterio de la Rábida. Pero en los demás monumentos han prevalecido como causa generadora el interés monumental, que es por lo común eminentísimo.*

El senador Ubierna señalaría nuevamente las inoperancias en que aparecía las declaraciones de Monumentos Nacionales, por lo que apuntaba como a pesar de la amplia legislación desarrollada a lo largo del tiempo: (...) *después de hacer resaltar la conveniencia de respetar y conservar esos monumentos y la necesidad que existe también de que por todo los medios posibles se evite la destrucción de tales obras de arte, me he de limitar a hacer un ruego a(...) el Sr. Ministro de Instrucción Pública, refiriéndome especialmente en los monumentos nacionales. La legislación que rige en España sobre este particular siempre ha procurado impedir el deterioro, el detrimento y la destrucción de estos monumentos: desde las leyes tan interesantes que existen en la Novísima Recopilación sobre este particular, hasta el decreto del Presidente de la República D. Emilio Castelar, el año 1873(...) existen muchos preceptos y leyes; pero últimamente nos encontramos con que merced a la feliz iniciativa del ilustre Ministro de Instrucción Pública, Conde de Gimeno, se dictó el año 1911 la ley relativa a la investigación, propiedad y conservación de excavaciones; que cuatro años después, siendo ministro del ramo, el conde de Esteban Collantes, se dictó también una disposición referente a las obras artísticas e históricas, y que, aunque parezca extraño, en nuestro país, donde existe esa plétora, esa abundancia de legislación, ese exceso de disposiciones reglamentando cualquier institución, no se había dictado una disposición clara en cuanto hace relación a los monumentos nacionales que de un modo claro regule la materia, ni existe unidad entre las disposiciones dictadas en tal sentido, y por eso nos encontramos con la anormalidad de que hay monumentos nacionales declarados en virtud de disposición ministerial, hay otros que lo están al amparo de una ley, hay disposición legal que se limita a consignar la declaración de monumento nacional y otras, como la dictada con fecha 24 de diciembre de 1912, que después de declarar monumentos nacionales dos edificios de Santiago, establece otras reglas para la conservación de los mismos; en una palabra, no existe una disposición en la que se determine el procedimiento a seguir para la declaración de estos monumentos; y en este terreno, yo reconociendo mi modesta actuación, no me he creído en el caso de presentar una proposición de ley en tal sentido; pero sí me permito rogar al Ministro de Instrucción Pública, ya sometida a la deliberación de las Cortes, en la que se consigne en primer lugar el procedimiento a seguir respecto de la declaración de monumentos nacionales; en segundo lugar, que se agrupen las distintas disposiciones que existan sobre esta declaración, es decir, se establezcan de un modo preciso los deberes y los derechos que el Estado tiene en virtud de esa declaración (...) y a mi juicio, otra tercera parte, que es la referente a la prohibición de exportación de esos monumentos nacionales<sup>2772</sup>. En la Sesión del Senado del 12 de julio de 1923 nuevamente se retomaría la cuestión del significado jurídico de la declaración de Monumento Nacional, en la que se ponía en duda el propio procedimiento administrativo. Nuevamente el senador Ubierna pondría en entredicho: *No existe ninguna disposición que determine de un modo perfecto el procedimiento a**

---

<sup>2772</sup> Diario de las Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 22 de febrero de 1921, pp.266-267.

seguir cuando se trate de los expedientes para la declaración de monumentos nacionales, como no existe tampoco ningún precepto que determine de manera categórica los efectos que han de producir dicha declaración, sino que existe tan caótica legislación que aparecen monumentos nacionales declarados por disposición ministerial, y en cambio, hay algunos que han sido declarados por virtud de una ley, dándose hasta el caso peregrino de que haya ley dictada diciendo: “Se declara monumento nacional el ex convento de San Benito de Alcántara (Cáceres), siempre que sea favorable los informes de la Academia de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando” Es decir, que esos trámites esenciales en el procedimiento, esos requisitos que debieran ser previos en el expediente para la declaración de monumento nacional de que se trata, en ese caso se han omitido y se subordina la eficacia de la ley al resultado de dichos dictámenes<sup>2773</sup>. Por su parte Elías Tormo se referiría a la parca concreción de la tutela legislativa en el ámbito español sobre la declaración del Monumento Nacional: *No está declarado monumento nacional aquella catedral y no lo está por una razón práctica que es la siguiente: La declaración de monumentos nacionales con referencia a los templos encuentran –como a ello aludía tan discretamente el Sr. Ministro de Instrucción Pública- alguna resistencia (...) de forma que las catedrales que ya están declaradas monumentos nacionales lo han sido por iniciativa de sus propios Cabildos o Prelados. Y ello es porque inmediatamente después de la declaración de monumento nacional, desaparece de tales templos la facilidad para las obras, y ocurre que se encuentran muchas veces con el conflicto práctico de que, teniendo recursos, no pueden hacer obras sino mediante la tramitación de un expediente complicado. Por eso, las Reales Academias de San Fernando y de la Historia y el Poder Público, aconsejado por esas Academias, no han prodigado tanto como se merecen la declaración de monumentos nacionales a los templos-catedrales, dándose incluso el caso de alguna en que el Estado había llegado a invertir sumas considerables, y, sin embargo, no estaba declarado monumento nacional. (...) Con este motivo quiero explicar una contradicción de hecho en los antecedentes legislativos que ha denunciado el Sr. Ubierna (...)*<sup>2774</sup>. Al mismo tiempo pondría en entredicho el procedimiento que se había utilizado hasta este momento para declarar algún bien inmueble como Monumento Nacional: *La declaración de Monumento Nacional se hace mediante un expediente –eso está perfectamente definido- oyendo a las dos Reales Academias que antes mencioné, y decidiendo el Ministerio, como es natural, de acuerdo con ellas y a veces de acuerdo con una de ellas (...) ha habido declaraciones de monumentos nacionales por leyes, y por leyes muy raras, que sin ser determinativas en absoluto, ponían la condicional de que se oyera previamente a las dos Reales Academias (...) Pues comenzó por haber declaraciones de monumentos nacionales parlamentarias, algunas de ellas muy desatinadas, y como nos encontrábamos en el Senado, los representantes de las Academias y algunos como yo, de la circunstancia de que venía del Congreso un proyecto bien concebido para declarar nacionales a algunos monumentos que lo merecían, en que no era propio que dijéramos que no, pero al mismo tiempo no nos parecía buen camino el decir que sí sin más estudio, llegamos a una fórmula que fue la que cortó las declaraciones parlamentarias de monumentos nacionales, que consistió en añadir en algunos de los proyectos la condición de que había de oírse a*

<sup>2773</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Sesión de 11 de julio de 1923, Núm.30, p.571.

<sup>2774</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Senado., Sesión de 11 de julio de 1923, Núm.30. p.574.

*las Reales Academias, no solo porque son Academias, sino porque ellas representan el estudio y no se limitan a decir sí o no, sino que razonan, envían un miembro de su seno para que estudie el monumento, hacen recopilación de los juicios ajenos, de las opiniones extrañas, y así desapareció la declaración parlamentaria de los monumentos nacionales. En los mismos términos se expresaría Urbietta sobre el procedimiento llevado a cabo a la hora de declarar un bien Monumento Nacional: ¿Dónde está la disposición emanada del Ministerio de Instrucción Pública a seguir en esta clase de expediente? ¿Si no hay más que una disposición ministerial del año 1916, siendo Ministro el Sr. Burrell, donde se exige que acompañe una fotografía o dibujo cuando se pida la declaración de monumento nacional? (...) Yo desearía para España una ley como la ley de 24 de marzo de 1910, que tiene Inglaterra, o como la de 11 de mayo de 1922, que tiene Italia, o como la de 21 de diciembre de 1913, que tiene Francia o como la de 1911, la de Bulgaria, que son leyes de carácter general, y no como la nuestra (...) que se refiere a un aspecto solamente del problema<sup>2775</sup>.*

José Ramón Mélida escribiría un Informe el 4 de junio de 1923 sobre las dificultades que habían tenido hasta este momento la declaración del Monumento Nacional, que aparece publicado en la Revista de la Academia de San Fernando el 30 de septiembre de 1926: *Las declaraciones de Monumentos Nacionales, encaminadas al laudable propósito de poner los ejemplares más dignos de ser conservados bajo la acción protectora del Estado, han venido haciéndose sin otro criterio que el de considerarlos aisladamente, teniendo en cuenta que el de considerarlos aisladamente, teniendo en cuenta tan sólo la particular importancia histórica y artística del monumento del que se trataba, acaso lo necesitado que se hallara de reparaciones, todo lo cual, si estuvo justificadísimo respecto de ejemplares arquitectónicos de primera línea, algunos únicos y magníficos, bastantes por sí solos para representar una época y un estilo, siendo a la par no pocas veces auténtico y vivo testimonio de nuestra pasada gloria, no es menos cierto que en muchos casos se dejó de tener en cuenta, al emitir los oportunos informes favorables, que en la misma población o en la comarca en que tal o cual monumento se encuentra, los hay, si a mano viene, más importantes y merecedoras de tal distinción y custodia. Había ya parecido mientes en ello la Academia, cuando para remediar esa deficiencia, propuso que se formase una lista o relación circunstanciada de los Monumentos que se considerasen con mérito suficiente para figurar en la total de los que cumplidamente representen en conjunto nuestra historia artística en todas sus fases, relación cuyo objeto no podía ser otro que el de constituir a modo de cuerpo de doctrina, el esquema de esa historia monumental que pudiera tenerse en cuenta, puesto que representaría un criterio general y comparativo, para con mayor conocimiento de causa informar en cada caso. Aprobada la moción, y acordado en consecuencia que el mejor modo de realizarla fuese reunir cierto número de propuestas que habrían de hacer los Académicos, se nombró una Comisión que, bajo la presidencia del Sr. Director, integraron los Sres. D. Ricardo Velázquez Bosco, D. Rodrigo Amador de los Ríos, D. Tomas Bretón, D. José Esteban Lozano, D. Narciso Sentenach, D. Manuel Aníbal y Álvarez y el que suscribe, al que después se unieron los Sres. D. Vicente*

---

<sup>2775</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.30, p.577.

*Lampérez y D. Elías Tormo. Ni quien este escribe, ni nadie, a lo que pensamos, puede conocer todos los Monumentos de una lista que pasa del millar, y en las que hay de todo género y épocas, desde la prehistórica hasta principios del siglo XIX (...) Por otra parte, para la clasificación cronológica, surgió desde luego la dificultad de que muchísimos Monumentos, en particular las iglesias, no conservan íntegro su estilo originario, sino que por virtud de reconstrucciones, adiciones y reparos, se encuentran en el mismo edificio ejemplares estimables de varios estilos, y si a mano viene es más importante la obra nueva que la primitiva (...) Antes tales consideraciones, hemos registrado el Monumento conforme a la importancia del estilo que le da más carácter y originalidad o la circunstancia o especial interés que principalmente le avalora (...) Venciendo en lo posible todas estas dificultades y otras varias, ha quedado la lista redactada por el orden cronológico propuesto, según el cual comprende los siguientes grupos: Monumentos prehistóricos; Monumentos Anterromanos; Monumentos Romanos; Monumentos Visigodos; Monumentos Latinos-Bizantinos; Monumentos Mozárabes; Monumentos árabes; Monumentos mudéjares; Monumentos románicos; Monumentos Ojivales; Monumentos medievales de carácter militar; Monumentos Platerescos o del primer renacimiento; Monumento de la primera restauración clásica; Monumentos Barrocos y Monumentos de la segunda Restauración Clásica<sup>2776</sup>.*

Los bienes inmuebles que serían declarados Monumentos Nacionales serían los siguientes:

- Real orden de 11 de enero de 1908 declarando Monumento Nacional la parte de muralla romana que exista en Sevilla entre las puertas de Córdoba y de Macarena.
- Real orden de 21 de febrero de 1908 declarando Monumento Nacional la Puerta del Carmen de Zaragoza
- Real orden de 28 de julio de 1908 por el que sea declarado Monumento Nacional el atrio de la iglesia parroquial de Caspe.
- Real orden de 28 de julio de 1908 declarando Monumento Nacional la Puerta de la Conquista o de Santa Margarita (Palma de Mallorca)
- Ley de 14 de mayo de 1909 declarando Monumento Nacional a la Catedral de Toledo.
- Real orden de 9 de febrero de 1910 declarando Monumento Nacional la Basílica Legionense de San Isidoro.
- Real orden de 19 de junio de 1910 disponiendo que se declare Monumento Nacional la iglesia de Santa María Magdalena de Zamora.
- Real orden de 10 de marzo de 1911 declarando Monumentos Nacionales las torres de San Martín y San Salvador y la techumbre mudéjar de la catedral (Teruel).

<sup>2776</sup> MELIDA, José Ramón “Relación de los Monumentos Españoles, declarados nacionales o arquitectos-artísticos y de los que en uno u otro concepto considera merecedora de serlos”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Segunda Epoca, Año XX, Núm.79, Madrid, 30 de septiembre de 1926.

- Real orden de 13 diciembre de 1912 declarando Monumento Nacional las ruinas de Itálica.
- Real orden de 22 de abril de 1912 declarando Monumento Nacional a la iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora).
- Ley de 22 de julio de 1912 declarando Monumento Nacional las antigüedades emeritenses.
- Real orden de 4 de septiembre de 1912 por el que se declaran Monumentos Nacionales la iglesia de Santa Catalina y la iglesia de San José de la ciudad de Sevilla.
- Real orden de 13 de diciembre de 1912 declarando Monumento Nacional las ruinas de Itálica.
- Real orden de 13 de diciembre de 1912 declarando Monumento Nacional las Antigüedades Emeritenses.
- Ley de 30 de diciembre de 1912 declarando Monumentos Nacionales la Capilla del Gran Hospital de los Reyes Católicos y la iglesia de Santo Domingo (Santiago de Compostela).
- Real Orden de 5 de febrero de 1913 declarando Monumento Nacional la iglesia de San Salvador de Priesca (Oviedo).
- Real orden de 5 de febrero de 1913 disponiendo que el Anfiteatro que forma parte de las ruinas de Itálica, se considere comprendido en la Real Orden del 13 de diciembre del año próximo pasado; que declaró Monumento Nacional las mencionadas Ruinas.
- Real orden de 14 de mayo de 1913 declarando Monumento Nacional el patio, el Claustro y anejos del Convento de San Telmo (San Sebastián).
  
- Real orden de 11 de diciembre de 1913 aclarando la de 14 de mayo, que declaró monumentos nacionales el Claustro del ex convento de San Telmo, de San Sebastián, y sus anexos.
- Real decreto de 6 de febrero de 1914 por el que se declara Monumento Nacional el ex monasterio de El Parral (Segovia).
- Real decreto de 27 de febrero de 1914 declarando Monumento Nacional el que se levantará en el Bruch para conmemorar la batalla de dicho nombre.
- Real orden de 16 de marzo de 1914 declarando Monumento Nacional el ex convento de San Benito (Alcántara, Cáceres).
- Real orden de 19 de marzo de 1914 declarando Monumento Nacional la fachada y primera crujía del edificio de la Universidad de Alcalá de Henares.
- Real orden de 7 de abril de 1914 declarando Monumento Nacional la capilla de Lucena, vulgo de las Urbinas, emplazada en Guadalajara.
  
- Real orden de 20 de abril de 1914 declarando Monumento Nacional al Palacio del Infantado de Guadalajara.



- Real orden de 30 de mayo de 1914 declarando Monumento Nacional de la iglesia de San Pedro de Avila. Real orden de 19 de agosto de 1914 declarando Monumento Nacional la iglesia de Benedictinos de Montserrat, de Madrid.
- Real orden de 17 de octubre de 1914 declarando Monumento Nacional la casa de Miranda (Burgos)
- Real orden de 31 de octubre de 1914 declarando Monumento Nacional la Catedral de Avila. Real orden de 4 de diciembre de 1914 declarando Monumento Nacional el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campóo (Palencia).
- Real orden de 4 de febrero de 1915 declarando Monumento Nacional la puerta de Toledo (Ciudad Real). Real orden de 24 de febrero de 1915 declarando Monumento Nacional la iglesia de Santiago del Burgo (Zamora).
- Real orden de 23 de marzo de 1916 declarando Monumento Nacional la iglesia de San Miguel de Foces (Ibieca, Huesca).
- Real orden de 22 de mayo de 1916 declarando Monumento Nacional las ruinas y el puente romano de Iruña (Alava).
- Real orden de 22 de julio de 1916 declarando Monumento Nacional la iglesia de San Cebrián de Mazote (Valladolid).
- Real orden de 12 de enero de 1917 relativa a la declaración de Monumento Nacional de la Cartuja de Miraflores (Burgos).
- Real Orden de 26 de enero de 1917 declarando Monumento Nacional la iglesia de San Nicolás (Burgos).
- Real orden de 3 de abril de 1917 declarando Monumento Nacional el edificio denominado Hospital de Santiago de Ubeda (Jaén).
- Real orden de 1º de junio de 1917 declarando Monumento Nacional el castillo de Peñafiel (Valladolid).
- Real orden de 8 de junio de 1917 por el que se declara Monumento Nacional la iglesia de San Julián de los Prados (Santullano, Oviedo).
  
- Real orden de 24 de agosto de 1917 declarando Monumento Nacional la ermita de San Baudelio, situada en las inmediaciones del pueblo de Casillas de Berlanga.
- Real orden de 31 de agosto de 1917 declarando Monumento Nacional el Palacio Municipal de Baeza.
- Real orden de 21 de abril de 1918 declarando edificio artístico el Castillo-Palacio (Valencia).
- Real orden de 10 de junio de 1918 declarando Monumento artístico la Cámara sepulcral existente en el Cerro de la Horca (Peal de Becerro, Jaén).
- Real orden de 12 de junio de 1918 declarando Monumento Nacional la catedral vieja de Lérida.

- Real orden de 29 de junio de 1918 disponiendo sea incluido en el Catálogo y Registro de edificios artístico que lleva la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, el palacio castillo de Belcaire (Gerona).
- Real orden de 30 de noviembre de 1918 declarando Monumento Nacional el edificio propiedad de Don Gonzalo Enríquez, conocido con el nombre de El Buñuelo (baños árabes), en Granada.
- Real orden de 24 de febrero de 1919 declarando Monumento Nacional la iglesia, claustro, y sala capitular del Monasterio de Veruela, que quedará bajo la inspección de la Comisión provincial de Monumentos de Zaragoza y la conservación del resto del monasterio, a cargo de la Corporación o particular que lo usufructúe.
- Real orden de 4 de julio de 1919 declarando Monumento Nacional el templo de la Veraz-Cruz de Segovia.
- Real orden de 29 de septiembre de 1919 declarando Monumento Nacional la iglesia de la Sangre (Liria, Valencia).
- Real orden de 6 de diciembre de 1919 declarando Monumento Nacional la iglesia de Santa María (Villalcázar de Sirga, Palencia).
- Real orden de 15 de marzo de 1920 declarando Monumento Nacional la iglesia de Santiago de Agüero (Huesca).
- Real orden de 19 de junio de 1920 declarando Monumento Nacional el Claustro y la portada de la iglesia del Monasterio de Santa María de Nieva (Segovia).
- Real orden de 16 de diciembre de 1920 declarando Monumento Nacional la iglesia y torre de Illescas (Toledo).
- Real orden de 16 de abril de 1921 declarando Monumento Nacional las murallas de Lugo.
- Real orden de 28 de mayo de 1921 por el que sea declarado Monumento nacional el convento de Religiosas de Santa María de las Dueñas, de Salamanca.
- Real orden de 11 de agosto de 1921 declarando monumento nacional la iglesia de Santa Comba de Bande (Orense).
- Real orden de 17 de septiembre de 1921 declarando Monumento Nacional la iglesia anexa al Convento de Monjas Trinitarias (Madrid).
- Real orden de 21 de diciembre de 1921 declarando Monumento Nacional, quedando comprendido en la lista de tales Monumentos, y como tal bajo la tutela del Estado y la inmediata inspección de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Toledo, las Murallas, Torres, Puertas y Puentes que se expresan y que existen en dicha ciudad.
- Real orden de 5 de enero de 1923 declarando Monumento Nacional la Cartuja de Miraflores, sita en Burgos, por lo que se refiere a la iglesia y

capillas, con exclusión del monasterio y demás dependencias de la Comunidad.

- Real orden de 12 de abril de 1923 disponiendo que se declaren Monumento Nacional la capilla de San Miguel de Celanova, el Monasterio de San Esteban de Rivas, de Sil y la iglesia, sala capitular y claustro gótico del Monasterio de Osera.
- Real orden de 12 de julio de 1923 declarando Monumento Nacional las ruinas de la ciudad y palacio de Medina Az Zahara (Córdoba).

### **6.2.2. Los bienes inmuebles de interés histórico-artísticos declarados como Monumentos Nacional no se identifican como pérdida de dominio.**

Se podría afirmar que el hecho de ser declarado un bien inmueble como Monumento Nacional en principio pasaba a ser propiedad del Estado, pero como podemos comprobar no fue siempre así. No cabe duda que desde principio del siglo XX se va a incrementar los expedientes incoado a instancia de Alcaldes de localidades para que el Estado adquiriera los bienes inmuebles de su localidad, al convertirse en una garantía de conservación, como podemos apreciar en el **Informe de 9 de mayo de 1916** acerca del expediente incoado a instancia del Señor Alcalde del barrio de Trespuentes (Alava) en solicitud de que se declaren propiedad del Estado las ruinas de Iruña y el puente de dicho pueblo<sup>2777</sup>. En el expediente se recalca como *La declaración de Monumento Nacional dictada a favor del histórico puente de Iruña, permitiría atender científica y artísticamente a su pronta restauración, librándolo de la total ruina que con perentoriedad le amenaza y que irreparablemente se consumará si el Estado no lo patrocina y ampara (...)*. Sin embargo en la interpelación de Rodríguez San Pedro en el Senado el 23 de mayo de 1909 precisaría que *la declaración de monumentos históricos o artísticos o monumentos nacionales no significa que sea con exclusión de ningún otro, sino que responde a causas puramente accidentales, a necesidad de conservación en unas ocasiones, de evitar el que se hagan reparaciones indebidas en otras, a procurar el mantenimiento de todos esos objetos en la pureza que les corresponde; pero eso no excluye que haya muchos monumentos que haya otros muchos monumentos que tengan ambos conceptos o uno de ellos y merezcan ser conservados y atendidos muy especialmente, y cuando se encuentran otros medios para su sostenimiento, no se acude a éste de declararle monumento nacional (...)* *Parécese que hay algunos que entienden que cuando un edificio se declara monumento nacional, por esa sola declaración, se hace una transmisión de propiedad y se arranca a alguien algo que le corresponde; y no es eso. La declaración de monumento nacional significa, no el cambio de propiedad, no la alteración del derecho que existe sobre ese mismo monumento; por consiguiente, las familias a quien pueden pertenecer esos edificios, continúan siendo propietarias de ellos, y con el derecho de propiedad tienen la obligación de la conservación de los mismos y su disfrute(...)* Pero al mismo tiempo subraya el límite del derecho del propietario

<sup>2777</sup> Academia. Boletín de la Academia de San Fernando, Segunda Época, Madrid, 31 de marzo de 1916, Año X, Núm. 37. pp.81-85.

en su uso: *Ahora bien; lo que en este caso significa la declaración de monumento nacional, es que ese mismo disfrute debe hacerlo de tal suerte, que no se perjudique, por el derecho legítimo que tiene el propietario a disponer de su propiedad, que no se perjudique, digo, el aspecto artístico o histórico que tiene dicho edificio, sin que se altere en lo más mínimo la propiedad por esa declaración de monumento nacional (...)* Lo que significa únicamente es que hay una regulación del ejercicio de ese derecho de propiedad, de tal suerte, que se concierte con el interés público para que esos monumentos se conserven (...) cuando hay un objeto, un monumento artístico o histórico, el que tiene derecho sobre él continúa con esos derechos, pero debe ejercitarlo de tal modo, que no se perjudique el aspecto histórico del objeto mismo (...)<sup>2778</sup>. Y añade: *El monumento nacional no es precisamente que sea de propiedad nacional, sino que es de interés nacional su conservación desde el punto de vista artístico e histórico*<sup>2779</sup>.

Sin embargo, la adquisición en propiedad de los bienes inmuebles declarados Monumentos Nacionales sería la tónica dominante en este momento, para poder salvaguardar su conservación, ya que como se refleja en la mayoría de los informes de la Real Academia de la Historia y de Bellas Artes, así como en los propios debates parlamentarios producidos a principio de siglo sobre tutela pública del Patrimonio Monumental se alude a la imposibilidad de ser declarado Monumento Nacional aquellos bienes que eran propiedad del dominio privado. Un caso significativo fue el derribo de la Casa de Zapata de Zaragoza, de propiedad particular, que a pesar de su interés histórico y artístico no pudo ser impedida por parte del Gobierno su demolición, habiendo instado por parte de las instituciones culturales que fuera declarada Monumento Nacional. De esta el 9 de marzo de 1902 la Comisión de Monumentos de Zaragoza que fuera adquirido por el Gobierno, o en su caso expropiado para que pudiera declararse Monumento Nacional: *Entienden la Comisión de Monumentos que tan pronto como los propietarios se persuadieran de que no pueden abusar del legítimo del Estado de adquirir dicha casa, cederían en mucho su actual intransigencia, a cuyo fin me encarga proponer a V.I. uno de estos dos procedimientos o los dos simultáneamente: 1º. Teniendo en cuenta las excitaciones hechas en las Cortes al Gobierno de S.M. para que adquiriera al Estado algunos cuadros de Murillo, que se venden en Sevilla y que intentan comprar ciertos extranjeros, se dicte una real disposición de interés general, conforme a lo que sucede en Italia y otras naciones y se insinúa en el párrafo 6º del artículo 21 del Reglamento de las Comisiones de Monumentos, en la cual se prohíba terminantemente la exportación de obras artísticas española y el desmonte de elementos ornamentales artísticos y arqueológicos, que aún siendo de propiedad particular, deban ser conservadas a juicio de las Reales Academias y Comisiones de Monumentos; 2º. Que se signifique a tenor los Ministros de Fomento, que atendida la intransigencia actual de los propietarios de la Casa de la Infanta, sería muy conveniente teniendo en cuenta el valor histórico y arqueológico que dicha Casa tiene, que se declare de utilidad pública su conservación, preparando de este modo la adquisición por el Estado en*

---

<sup>2778</sup> Diarios de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.151, 23 de mayo de 1909, p.3642.

<sup>2779</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Senado, Núm.151, 23 de mayo de 1909, p.3643.

*condiciones aceptable, previo al oportuno expediente de expropiación, que por de pronto evitaría la venta que amenaza de manera apremiante, y dará lugar a que una vez así adquirida fuera declarada Monumento Nacional. En el Informe de Francisco Cordera de 5 de diciembre de 1902 se insiste en la posibilidad de que fuera adquirido el edificio en cuestión por el Estado, y ser declarado por consiguiente Monumento Nacional: Hace ya bastantes años que se están haciendo gestiones para la adquisición por el Estado de este notable edificio: en el expediente, que se ha pasado a mi estudio, aparece comunicaciones de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Zaragoza, y acuerdos de esta Real Academia, aplazando las gestiones de aquellas, desde 1894, sin que hasta ahora hayan producido el resultado que se esperaba. Hoy la cuestión parece llegada a próximo desenlace, pedidas por los propietarios autorización para proceder al derribo del edificio casi en ruinas, el Ayuntamiento no se cree autorizado para denegarla habiéndose limitado a diferirla, para ver si puede conseguir la adquisición por el Estado y con este objeto con fecha 22 de agosto último ha elevado instancia al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en solicitud de que se declare monumento nacional, sin duda para que después se proceda a la expropiación forzosa. Sin embargo, el propio Cordera se cuestionaba que si en el supuesto de que el Palacio de la Infanta sea de extraordinario mérito artístico arqueológico puede ser declarado monumento nacional, siendo como es de propiedad particular(...).El caso llegaría al propio Senado, puntualizando el propio Ministro de Instrucción Pública Allende Salazar el 26 de mayo de 1903:No puede el Gobierno declarar de ninguna forma monumento nacional la Casa de la Infanta, de Zaragoza; se intentó realizar esta declaración, y no tuvo efecto por la sencilla razón (...) que es una finca que pertenece a un particular. En estas condiciones no podía el Estado declarar nada mientras no tuviera hecha la adquisición de la propiedad de esa finca<sup>2780</sup>. Nuevamente el propio Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la sesión del Senado de 28 de mayo de 1903 denegaba la correspondiente asignación presupuestaria para su adquisición: (...) no encuentro que el Estado se halle en condiciones de hacer nuevas adquisiciones, cuando tenemos tantos y tantos monumentos artísticos de un valor histórico excepcional (...) que nos vemos obligados a desatender (...) Por esta razón no extrañará S.S. que con toda sinceridad lo manifieste que no tengo el propósito de proponer un crédito extraordinario (...) <sup>2781</sup>. El 4 de junio de 1903 el Conde De Casa Valencia anunciaba la demolición de la Casa de la Infanta de Zaragoza, al no haber sido adquirido por el Estado: (...) he recibido una interesante carta de uno de los individuos de la Comisión de Monumentos de aquella ciudad, diciéndome, con gran sentimiento, que los dueños de aquella hermosa y artística finca, viendo que el Gobierno no se la compraba, la han derribado (...). El propio Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Allendesalazar confirmaba la noticia, precisando que la falta de medios económicos es lo que le llevaría a no ser adquirida por el Estado: si ha habido una tramitación larga en este asunto, ha sido por falta de medios y de fondos para atender a esta adquisición y a la declaración después de monumento nacional de aquel edificio, de*

<sup>2780</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Núm.10. Sesión del 26 de mayo de 1903, p.69. Intervención del Ministro de Instrucción Pública, Allendesalazar.

<sup>2781</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Sesión del 28 de mayo de 1903, Núm.10, p.69.



*la artística casa de Zaporta. Nuevamente apuntaba al derecho del propietario de derribar su inmueble: los dueños de aquella finca, usando de su perfecto derecho, habían realizado su demolición. Y es que el derecho de disposición de un bien se superponía a los intereses generales del Estado*<sup>2782</sup>.

### **6.2.3. El incumplimiento del deber de conservación por falta de presupuesto del Estado sobre los bienes declarados Monumentos Nacionales.**

A pesar de su declaración como Monumentos Nacionales, el Estado no cumpliría en gran medida la obligación de conservar y restaurar que aparecía adherida a los mismos, bien por falta de un presupuesto adecuado, bien incluso por carecer de una verdadera regulación jurídica que lo delimitara. En la **Sesión del 28 de mayo de 1914** el senador Avilés pediría la promulgación de un proyecto de ley donde se precisara el procedimiento a seguir por el Estado para conservar y restaurar aquellos bienes inmuebles que habían sido declarados Monumentos Nacionales:(...) *A los monumentos declarados nacionales, porque hasta ahora, como sabe S.S., estas declaraciones están hechas tomando las precauciones que deben tomarse, de oír previamente a las Reales Academias, para que estas declaraciones no se conviertan en algo que respondan exclusivamente a una mira particular, provincial, pequeña, pero resulta que para el cuidado y conservación de esos monumentos, no existe una disposición orgánica, en la que sistemáticamente, ordenadamente se proceda a esta restauración o conservación (...) y no proceder a la conservación como se hace hoy, por los apremios del momento o por la influencia de algún Senador o Diputado, que noblemente, con la mejor intención la solicita, porque es cosa que toca a su provincia, sino que es necesario considerar eso desde un punto de vista más alto, desde el punto de vista del interés general del Estado y de la conveniencia del bien público. Desearía, pues, que S.S. dictase alguna disposición relativa a ese asunto*<sup>2783</sup>.

Este hecho llevaría en la mayoría de las ocasiones a una verdadera dejadez institucional a la hora de establecer las medidas suficientes para que fueran conservados los inmuebles declarados Monumento Nacional. En un oficio de 21 de septiembre de 1914 de la Comisión de Monumentos de Toledo se denunciaba el lamentable estado de conservación de los monumentos declarados nacionales en la ciudad y se solicitan gestiones de la Real Academia de la Historia ante el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en unos términos que no dejan duda de la incidencia de las autoridades públicas pertinentes: *El lamentable y vergonzoso estado en que se encuentran los monumentos declarados nacionales en esta ciudad, hace el que esta Comisión eleve su voz a esta docta Academia pidiendo la protección que necesita para honra del arte, de la Historia (...) Viajeros ilustres de todas las naciones, vienen constantemente a visitarlos, llevándose impresiones muy desagradables del estado de abandono en que*

---

<sup>2782</sup> Diario de las Sesiones de las Cortes. Congreso, 4 de junio de 1903, p.130.

<sup>2783</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado, Núm.39, Sesión del jueves 28 de mayo de 1914, p.490.

los encuentran, que dicen muy poco a favor de la cultura nacional. La antigua sinagoga del Tránsito, cuyo tejado cribado de goteras y cubierto de espesa maleza, tiene podrida toda la armadura (...) El Cristo de la Luz, también plagado de goteras, con su interesante fachada esperando una inteligente restauración y el derribo del vestíbulo que la oculta (...) Y por último el templo de San Juan de los Reyes, y sus inmediatos locales que ocupan el Museo Provincial, sin terminar las obras que con tanta lentitud vienen llevándose (...). En las páginas de La Alhambra se denunciaba el abandono que se encontraba la iglesia monacal de San Jerónimo de Granada, que había sido declarado Monumento Nacional: *Con la declaración de Monumento Nacional había bastante para contener la ruina! Y gracias que no se hizo con San Jerónimo lo que con el arco famosísimo de las Orejas o puerta de Bibarrambla: declararlo monumento nacional para demolerlo después (...)* Cuatro o cinco años después, en una ocasión, en que, se volvió a hablar de la inmensa grieta abierta en los muros de la capilla mayor, se dio orden de formar un proyecto de restauración, y para todos los trabajos de exploración y estudio se libró una exigua cantidad que se agotó bien pronto sin que pudiese terminarse el proyecto(...)Después... hasta para hospital de repatriados enfermos estuvo indicada la iglesia y no se realizó el proyecto(...)Más tarde, las autoridades eclesiásticas, sin contar con la Comisión de Monumentos, hicieron entrega formal y solemne de la iglesia a los Padres Redentoristas, los cuales estuvieron muy poco tiempo en ella, pues las señales de ruina se acentuaron y fue preciso cerrarla al culto como hoy continúa. Casi al mismo tiempo, las autoridades militares proyectaron una reforma en el convento, convertido desde hace años en cuartel de caballería<sup>2784</sup>.

En el Informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 18 de mayo de 1917 sobre el estado ruinoso de la Torre del Angel de la Catedral de Cuenca redactado por los ponentes Ricardo Vlázquez Bosco y Luis Landecho precisaba las dificultades que el Estado tendría a la hora de cumplir con las obligaciones pecuniarias que conllevaban la declaración de un bien inmueble como Monumento Nacional: *El número de los declarados nacionales crece de día en día, llegando ya a ciento veinte; pasando de cuarenta los que están actualmente en restauración o reparación; siendo la consecuencia inevitable de esto que las obras tengan que hacerse con una lentitud desesperante. Respecto a designar la cantidad que haya de destinarse a una obra, como la ley de Presupuestos nada dice, es de exclusiva competencia del Señor Ministro, y fuera de las atribuciones de esta Academia*<sup>2785</sup>. En una misma línea se encontraría el informe redactado por los ponentes-académicos Luis de Landecho y Elías Tormo denegándole la declaración de monumento nacional al Real Santuario y Fortaleza de la Santísima Cruz de Caravaca (Murcia), estimando la falta de recursos que el Estado tenía para poder cumplir con la obligación de conservar el inmueble: Al demandar la clasificación del Santuario y Fortaleza de Santa

<sup>2784</sup> “La iglesia de San Jerónimo” *La Alhambra*, Revista Quincenal de Artes y Letras. Año IX, 30 de septiembre de 1906, Nº 205, p.412.

<sup>2785</sup> “Informe acerca del estado ruinoso de la Torre del Angel de la Catedral de Cuenca”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Año XI, Núms.42 y 43, Madrid, junio-septiembre, 1917, p.63.

Cruz de Caravaca entre los monumentos nacionales, que se haga con todas las gracias prerrogativas que a los de su clase corresponden, trae aparejada consigo la obligación del Estado de sufragar los gastos de conservación y restauración que el Monumento reclame, y la Comisión no puede proponer, el que se imponga esa nueva carga al Estado, mientras los Monumentos ya reconocidos como Nacionales sigan esperando momento en que los Presupuestos generales del Estado concedan los recursos necesarios para que quede su vida asegurada (...)<sup>2786</sup>.

#### **6.2.4. El deber de conservación de los Monumentos Nacionales por la instancia pública a la que pertenezca.**

Una de las controversias más frecuentes sobre la conservación de los bienes inmuebles declarados como Monumento Nacional fue la de resolver qué institución pública era la encargada de asumir dicha obligación. En el Informe de la Real Academia de la Historia del 27 de enero de 1923 se intentaría aclarar a quién correspondía la conservación de las murallas de Lugo declarada monumento nacional. Al comienzo del Informe se puntualiza como el Municipio lucense había tradicionalmente asumido la conservación de las mismas, pero desde su declaración de Monumento Nacional se desentendió de sus funciones alegando que era obligación del Estado: *Las murallas de Lugo, declaradas Monumento Nacional por Real Orden de 16 de abril de 1921, tienen el carácter de paseo público, constituido por un ancho adarve, desde el que se domina un bellissimo paisaje. Este oficio, que desempeña desde tiempo inmemorial, y aquella declaración plantean el problema de a quién compete la conservación del monumento, necesitado de una reparación periódica. Hasta ahora, el Municipio lucense, había atendido a este servicio. Pero desde la declaración de Monumento Nacional le han abandonado en absoluto, por entender que no le corresponde: no obstante lo cual, sigue percibiendo un canon anual a la empresa del alumbrado público por el uso de la muralla para sustentar los postes conductores de los cables. Ante este hecho, sería la Comisión de Monumentos acordó ponerlo en conocimiento de la Superioridad, rogándola determine de un modo concreto, por el medio que estime oportuno, a quién corresponde la conservación de la muralla; y en caso de que determine que sea la Corporación municipal, se la obligue a consignar en sus presupuestos la cantidad necesaria para una o dos reparaciones del pavimento del adarve, al año, por lo menos. El dictamen de la Real Academia dejaría claro que el Municipio debía de seguir ostentándola, al no perder en principio su estado de dominio sobre ellas: No es pertinente al presente, ni hace al caso, entrar en la cuestión del estado jurídico de las murallas de Lugo, relativamente a su propiedad. Como suya la ha considerado el Municipio lucense desde tiempo inmemorial, como prueban irrefutablemente todos los actos de dominio que ha venido ejerciendo, siendo el mayor la escandalosa demolición de un cubo y una cortina, para la prolongación de*

---

<sup>2786</sup> “Informe de la Real Academia de San Fernando acerca del expediente sobre declaración de Monumento Nacional del Real Santuario y Fortaleza de la Santísima Cruz de Caravaca (Murcia)”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Madrid, 31 de marzo de 1922, Año XVI, Núm.61, pp.40-41

*una calle, que motivó el ruidoso expediente terminado con la condena de la Corporación Municipal al pago de una indemnización y otras penalidades. Y como suya la sigue considerando, puesto que cobra el canon a que se refiere la Comisión de Monumentos. A lo que añadía que el hecho de ser declarado Monumento Nacional no alteraría su estado de dominio: Ciertamente que, de ser la muralla de propiedad municipal antes de la declaración de Monumento Nacional, en igual estado jurídico continúa después, puesto que esa declaración en nada se refiere a las cuestiones de propiedad, ni en nada lo altera. Se dejaba pues claro que la conservación ordinaria de los Monumentos Nacionales corre a cargo de sus propietarios o usufructuarios. Así, sus cabildos atienden a la conservación ordinarias de las Catedrales de Burgos, Toledo, Zaragoza, etc.; la Diputación de Navarra, a la de la Cámara de Comptos; la Comunidad franciscana, a la del Monasterio de Guadalupe, etc. El Estado, en los Monumentos Nacionales, solo se carga con las obras de reparación o restauración que se salen de lo ordinario, y exigen proyecto y dirección facultativa. Pues siendo esto así, no puede caber la menor duda de que la conservación ordinaria de las murallas de Lugo corresponde a su propietario y usufructuario, el Municipio de la ciudad. El Estado, al presente, sólo tiene la obligación de que la guarda del Monumento, a cuyo fin está ya en funciones una personalidad nombrada al efecto, a lo que se añadía que vista la desatención de este deber en que ahora incurre la Corporación, el Ministerio de Instrucción Pública debe recabar del de la Gobernación orden a aquella que lo atienda y, además que consigne en todos los Presupuestos municipales venideros cantidad necesaria para la conservación ordinaria del Monumento (2º).*

**6.2.5. El deber de conservar el inmueble íntegramente, respetando cada una de sus partes, y la potestad de intervención del Estado en función del artículo 3º de la Ley de 1911.**

Una de las consecuencias vital en la conservación de un bien inmueble declarado Monumento Histórico-Artístico en su total integridad, sin exceptuar ninguno de los elementos que lo compongan, respetando así el conjunto en su total identidad. Es el Estado quien tendrá la obligación de conservar todos los inmuebles que habían sido declarados de cómo Monumento Nacional. El Informe que realizó Ramón Mélida sobre la expropiación de una casa situada en la plaza del Rey de Barcelona, que se unía íntegramente a la Capilla Real de Santa Agueda, declarada Monumento Nacional, con el objeto de ser derribada por causa del ensanche que se estaba produciendo en la ciudad catalana, puede ser un buen ejemplo del deber que tenían todas las instancias públicas o privadas de conservar íntegramente un inmueble de carácter histórico-artístico. La polémica había surgido a raíz de la situación legal que se encontraba el edificio anexo, que incluso pudiera pertenecer a la propiedad privada, por declaración de herederos ab intestato. A raíz de este hecho, la Dirección general de Bellas Artes, resolvió remitir a la Academia el mencionado expediente, a los efectos de lo que preceptúan el art.3º. de la ley de 7 de julio de 1911 y 4º del Reglamento para su ejecución de 1º de marzo de 1912, en los cuales se previene este trámite cuando el Estado tenga noticias de que se

realizan reformas que contradigan el espíritu de esta expresada Ley (5º). En el Informe de Ramón Melida se plantearía dos cuestiones primordiales ante la tutela del edificio en cuestión: el primero se refiere al régimen de la propiedad del bien, que aunque es una cuestión jurídica que no nos compete, pero que afecta a la propiedad del Estado de *un Monumento que con estar declarado Nacional parece que ha de tener a su favor todo pronunciamiento y garantía, puesto que tal declaración es, ante todo, un reconocimiento legal de lo que para la Nación representan de intangible y precioso el Arte y la Historia, cuyo restos gloriosos son los monumentos que por tal medio y para tal fin toma el Estado bajo su protección.* La segunda cuestión resume la cuestión que se plantea, la conservación íntegra del edificio: *El otro aspecto del caso es lo que sería extraño por cierto desmembrar un monumento, separando de él una parte, lo que por los mismos fueros del Arte no parece lícito. Trátase, es cierto, de un anejo, que además de emplearse para un fin utilitario tan esencial como en la conservación de la parte principal del Monumento, forma cuerpo con éste completando con su fisonomía, por lo que en este caso particular, como en general en todos, no parece lícita una desmembración que pugna con el espíritu de las leyes por virtud de las cuales pone el Estado bajo su tutela los Monumentos para conservarlos en su integridad.* En consecuencia, esta Real Academia ha acordado proponer a V.I. no permita la desaparición de la casa núm.14 de la Plaza del Rey, aneja a la capilla aneja a la Real Capilla de Santa Agueda, de Barcelona.

A raíz de la Real Orden de publicada en la Gaceta de Madrid de 27 de febrero de 1924 se autorizaba a la Diputación Provincial de Madrid para vender el solar que ocupaba la Casa-Hospicio de esta Corte, poniéndose como condición de que la dicha *entidad verifique el despiece, silicatado, clasificación, enumeración y embalaje de las piedras que constituyen la portada, escudos y otros adornos artísticos, poniéndolos a la disposición del Gobierno en condiciones de reconstitución donde éste ordene,* al mismo tiempo que en su parte expositiva se exponía las dificultades que lucha la Diputación para la instalación de los asilados, y que la falta de recursos económicos sólo puede subsanarse con la enajenación del solar perteneciente al Hospicio. La Real Academia de San Fernando elevaría al Jefe del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, una moción en la que se defendía que el edificio no fuese despedazado y trasladado a otro lugar ya que el Monumento quedaría dañado en su integridad. En el dictamen de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando queda constancia de la defensa que van a mantener por la integridad completa del edificio, fundamentándose en la importancia artística del conjunto, como queda plasmada en los siguientes términos: *Si la Academia mostró singular empeño en la conservación de este Monumento, fue en razón de ser ejemplar único y bellissimo dentro de una tendencia arquitectónica característica de Madrid, a ser escasísimos los Monumentos que en la villa y corte jalonan su historia (...)* La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hizo notar de antiguo que el interés del Monumento a que se refiere no estriba exclusivamente en su Portada, escudos y otros adornos artísticos, y por eso, al ser declarado el Hospicio monumento



*arquitectónico-artístico en 22 de noviembre de 1919, se tuvo por tal –aceptando la propuesta de la Real Academia- no solo la portada del mismo, sino la primera crujía del edificio y su capilla: en los Monumentos artísticos de tipo barroco no habría el debido contraste, ni sería tan intenso el efecto de su recargada, exaltada y febril ornamentación, si junto a los trozos en que los violentos efectos de luz y sombra se modelan no existiera las masas planas y tranquilas que le dan el equilibrio, el ritmo, sin el cual se desvirtuaría su conjunto y se disiparía su carácter. Al mismo tiempo critica la posibilidad de que el edificio fuera transportado en otro lugar, al considerar que el inmueble quedaría totalmente destruido: Así es que, aun dando por cierto el que la portada, escudos y adornos pudieran ser transportados a otro lugar, y allí ordenados de nuevo o contruados, el Monumento estaría perdido sin remedio. El remedio de proyectar otro edificio público o privado con el pie forzado de estos elementos, cuya salvación se pretende, sería, por una parte, carísimo y un verdadero rompecabezas para el arquitecto-arqueólogo que lo intentara. Si se pretende injertar sus trozos en otro edificio vivo, no proyectado adrede, el resultado sería monstruoso. Si, finalmente, sólo volviera a levantar el Estado las piedras, cuya conservación ordena, el efecto de esas piedras talladas, sin las masas planas, en lo restante del edificio sería lamentabilísimo. La Academia quiere referirse a la imposibilidad que, a su juicio, existe para que la portada y adornos se salven en el caso de que la obra se despiece. Si se hubiera decretado el derribo de todo, salvo estos elementos que se ordena despedazar, silicar, clasificar, enumerar, embalar, trasladar y montar, acaso hubieran resistido largos años a la impiedad de los elementos atmosféricos, y su ruina como detalles arquitectura hubiera sido más lenta que la del total Monumento (...) Pero si se despiezan, silicatan, etc, la portada, escudos y adornos tal como se ordena, la ruina de estos detalles será simultánea con el intento (...) se convertiría en un montón de escombros, y sus innumerables añicos constituirían un puzle imposible de componer después.*

#### **6.2.6. La obligación de conservar al inmueble declarado Monumento Nacional por parte de la entidad pública o privada que lo haya adquirido en usufructo.**

Durante los primeros decenios del siglo XX, se siguió cediendo en usufructo a entidades públicas, casi nunca a las privadas, una serie de inmuebles que hubieran sido declarados Monumento Nacional, con el objeto de que pudieran desempeñar un servicio público, a cambio de aceptar la entidad adquirente en usufructo las obligaciones que se le impondrían con el fin de que respetara y conservara al edificio en cuestión, fundamentada en los informes que estableciera la Real Academia de Bellas Artes. El **Informe del 4 de mayo de 1909** de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid sobre el Monasterio de Santa Creus para que fuera cedido en usufructo a un Centro Instructivo Agronómico<sup>2787</sup> se centra primordialmente en las obligaciones que debían cumplir sobre la conservación del inmueble así como el respeto del uso espiritual que sigue teniendo: *La conservación de tantas y tan*

<sup>2787</sup> Academia. Boletín de la Academia de San Fernando, Segunda Época, Madrid, 30 de junio de 1909, Año III, Núm.10, pp.82-86.

*importantes joyas arqueológicas y artísticas exige grandes y sólidas garantías, y la Academia entiende, que si no es prudente oponerse á la instalación del Instituto Agrícola proyectado en los recintos que menos puedan padecer la concurrencia cotidiana de los alumnos, es si, necesario que queden excluidos de la concesión, además del templo, el claustro y Sala capitular, y que siga el Monumento sometido á la continua inspección de persona facultativa y competente, no haciéndose en él cambio ni obra alguna sin que antes sea sometido el plan de la misma al examen de la Comisión de Monumentos de la provincia, que deberá enviarle á su vez á la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.*

Para ello, la Real Academia de San Fernando establecería varias restricciones, entre las cuales estarían: 1º) El respeto del uso parroquial del templo: *Que puede otorgarse la cesión solicitada del uso del edificio menos la de la parte afecta al culto parroquial, claustro y Sala Capitular en la forma que se indica en la instancia del Instituto, y mediante la devolución íntegra del mismo con las mejoras que se hayan hecho de su cuenta, si las circunstancias no respondiesen á los fines que intenta la expresada entidad;* 2º) La tutela del inmueble por los organismo público de la tutela del Patrimonio Monumental: *Que la Comisión provincial de Monumentos de Tarragona, por sí, o por delegación de la Central de Monumentos ó de ambas Academias de Bellas Artes y de la Historia, queda en el pleno uso de sus facultades para la inspección, vigilancia y aprobación de las obras que en el edificio se verifiquen, así como para la realización de cuantos servicios tienen encomendados con destino a la conservación de aquel edificio, en el que no podrá ejecutarse obra de ninguna clase sin la aprobación previa de dicha Comisión, y la de las entidades que tienen el deber de aprobarlas, inspeccionarlas y consentirlas en las de carácter monumental;* 3º) El respeto por una serie de dependencias del inmueble, cuyo uso fuera de su destino original, desvirtuarían la identidad del mismo: *Que si bien en el edificio existen departamentos que pueden perfectamente ser destinados á lo que se pretende, hay otros (como son el Palacio de los antiguos Reyes, aula capitular, dormitorio de novicios y archivo, claustro nuevo, etc.) para los que no se concibe otro destino que aquel que determinó su construcción, y en este concepto, la Comisión provincial, á raíz de la cesión que se solicita, procederá a demarcar una zona sobre cuyo recinto el Instituto tendrá, además de las obligaciones generales de conservación, limpieza y custodia, la de exhibirlo a los visitantes, en la forma reglamentaria, y la de no utilizarlo más que para la celebración de certámenes, congresos, distribuciones de premios, recepciones oficiales y otros actos análogos, quedando exceptuados hasta para estos mismos actos la iglesia, el claustro y la Sala Capitular, y absteniéndose en un todo de aprovechar los demás para uso de otros género, que desnaturalizarían el aspecto histórico y artístico de los respectivos locales con instalaciones ó ejercicios impropios de su carácter monumental, ó que podrían deteriorarlos con la colocación de maquinarias, almacenaje de productos ó frecuente movimiento de alumnos y trabajadores;* 4º) Se seguiría concediendo la partida presupuestaria para la conservación del monumento: *Que debe conservarse la partida consignada en los Presupuestos del Estado para obras de conservación de dicho edificio, independientes de las que practique el Instituto á los fines que pretende, toda vez que la conservación artística debe correr á cargo del Estado, para disponerla el Gobierno, á propuesta de la Academia y Comisiones, en la*

parte monumental en la forma en que sea conveniente; 6º) Se establecería la autorización de los miembros de la Comisión Provincial para el libre acceso, así como a personas autorizadas para su estudio: *Que además de la libre entrada a la Comisión provincial y á cada uno de sus vocales en todo el edificio y sus dependencias, y á las personas debidamente autorizadas por la Comisión para el ejercicio, vigilancia y custodia del monumento, se señalarán horas diarias, de común acuerdo entre dicha Comisión y el Instituto, para la visita del mismo, facilitando así el estudio del monumento y de sus detalles á los turistas y á los curiosos, con tal de que guarden las disposiciones que el Reglamento que al efecto se redactará determinen y* 7º) Se establecería la obligación por parte del Instituto de presentar todas las obras que se iban a realizar en el Instituto para la instalación de la escuela: *Que en la concesión se señalará un plazo para que el Instituto presente á la aprobación de la Comisión de Monumentos los planos y proyectos de las obras que intente verificar en el Monasterio para la instalación de las escuelas, las cuales, si afectan á la parte monumental, se remitirán a su destino á los efectos de su aprobación por las entidades técnicas, quienes á la vez designarán el tiempo en que habrán ejecutarse dichas obras, entendiéndose caducada la concesión si no se cumplen los plazos señalados, ó no se realizan las obras en la forma acordada (...).*

### **6.2.7. La obligación de conservar la identidad histórica y artística de un bien inmueble cedido a la Iglesia para uso espiritual.**

Durante los primeros decenios del siglo XIX va a ser muy usual la cesión por parte del Estado a la Iglesia, tanto entidades parroquiales como órdenes religiosas, de algunos bienes inmuebles declarados como Monumento Nacional para uso religioso. Para ello la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando redactaba un informe donde incorporaba una serie de condiciones que tendría que aceptar la entidad adquiriente en usufructo. Un caso significativo puede ser el Informe de 30 de junio de 1918 acerca de la solicitud del Procurador General de PP. Benedictinos en España, para que se les ceda en calidad de usufructo la antigua iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de esta Corte<sup>2788</sup>. El Monasterio había sido declarado *monumento nacional por Real Orden de 19 de agosto de 1914, solicitando la comunidad religiosa el templo para que fuera dedicado al culto, comprometiéndose la Orden a cuidar en lo futuro de la conservación y a construir en el pequeño solar inmediato, las dependencias de servicio de la iglesia, como antes estuvieron, cuyas obras de conservación y de reconstrucción se habrán de hacer siempre con aprobación del Ministerio, previo informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*. Alegaban al mismo tiempo los solicitantes *en apoyo de su petición que la iglesia fue fundada en 1611 por el rey Felipe IV, con destino a dicha Comunidad que habitó el monasterio adjunto, donde realizó profundos estudios, lo que ahora se repetiría, prestando útiles servicios a la cultura patria*. Al mismo tiempo se puntualiza como el Ministerio saldría ganando favorablemente, ya que se aliviaría *el crecido gasto de*

<sup>2788</sup> Academia Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tercera Época, Madrid, 30 de septiembre de 1918, Número 47, pp.147-149.

*conservación que para el Estado implica la existencia de tantos monumentos nacionales, puesto que la Orden se compromete a costear la de la iglesia de que se trata, que, desde luego, perdería el triste aspecto de ruina que hoy ofrece, y que, en este caso, el alivio para el Estado es mayor, porque, próxima a derribarse la Cárcel de mujeres, por traslado a la nueva prisión que se está construyendo, la iglesia quedará aislada por aquel lado, y acaso en situación que exija obras considerables. Todas estas consideraciones aconsejan, a juicio del Ministerio, dejar al cuidado de las Corporaciones religiosas que lo soliciten los edificios piadosos declarados monumentos nacionales, siempre en concepto de usufructo y con el derecho de intervención en las obras que sean precisas, que habrán de ser por cuenta de los usufructuarios, puntualizando que se tiene como precedente los casos del monasterio de la Rábida, cedido a los franciscanos por Real Orden de 12 de octubre de 1892, y de la Capilla de San Gregorio de Valladolid, a los PP. Dominicos en 15 de abril de 1915, de cuya última disposición se acompaña copia.*

La Real Academia de San Fernando dictaminó un informe favorable, siempre que fuera aceptada por la congregación religiosa las siguientes condiciones: 1º. La cesión se hace exclusivamente en usufructo y a título de reversible, siempre, y en todo momento que el Estado lo exija, concediendo el plazo de un año para desalojar el monumento; 2º. La Congregación de PP. Benedictinos se compromete a sufragar todas las obras de conservación del monumento; bien entendido que el Estado podrá imponerle siempre que las estime necesarias para la vida y el aspecto del edificio, por los que está obligado a velar, como monumento nacional que es; 3º. La Congregación de PP. Benedictinos podrá efectuar las obras de reconstrucción de los locales de servicios de la Iglesia, a que se refiere en su solicitud; igualmente tendrá que construir los que sean precisos para la consolidación del edificio cuando se efectúe el derribo de la Cárcel de mujeres; 4º. Para todas las obras de conservación, reconstrucción y construcción, los PP. Benedictinos habrán de pedir la autorización del Ministerio, presentando los oportunos proyectos, que éste hará informar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y sometiéndose en absoluto a la superior decisión; 5º. La Real Academia de Bellas Artes tendrá siempre el derecho de entrada del edificio, a los fines de inspección que le están encomendados y 6º. Sería muy conveniente que en la Real orden de cesión se consignase que todos y cada uno de esos proyectos, así como la dirección de las obras que comprenda, habrán de ser ejecutadas por uno de los arquitectos del servicio de Negociado de Construcciones civiles del Ministerio, designado por éste, pero corriendo a cargo de la Congregación el pago de los honorarios, según la tarifa.

#### **6.2.8. El deber de conservar los bienes muebles declarados Monumentos Nacional cedidos en usufructo con fines militares: El antiguo convento de San Marcos de León.**

El antiguo convento de San Marcos, declarado Monumento Nacional en 1844, sería cedido por el Gobierno para fines militares. Desde 1859, el edificio había sido ocupado por los jesuitas después de su expulsión, adoptándolo como Colegio de Misiones de Ultramar, encontrándose en un estado lamentable de conservación. A pesar de la gran relevancia educativa que tuvo, el centro educativo duró solo ocho años, al ser nuevamente expulsado la Compañía de Jesús con la Revolución de 1868. Hacia 1867 se comenzó a perfilar la necesidad de establecer el futuro Museo Arqueológico en el inmueble, a pesar de la disconformidad de los jesuitas. **El 28 de febrero de 1894** se manifestó por Real Orden al de Hacienda la conveniencia de que se exceptuase de dicha cesión los locales que dicha Comisión de Monumentos Por Real orden de 10 de abril de 1894 se cedió por el Ministerio de Hacienda al de la Guerra, el exconvento de San Marcos de León, con destino a las oficinas del Estado Mayor general del 7º Cuerpo del Ejército, exceptuándose aquellas dependencias que había pedido la Comisión de Monumentos para instalar un Museo Arqueológico, en la que se incluía la iglesia, sacristía y locales que el Museo Arqueológico que ocupa, *incluyendo en estos los que reclama la independencia y completa seguridad del edificio a fin de que al efectuarse las obras de instalación en el mismo, deberán llevarse a cabo previo acuerdo y bajo la inmediata inspección de la expresada Comisión de Monumentos, no sufriendo detrimento alguno su integridad y belleza artística.* La Real orden determinó que la Comisión de monumentos históricos y artísticos de León se sirviera hacer entrega con las debidas formalidades del edificio, excepto la iglesia, la sacristía y locales que el Museo arqueológico ocupa, incluso los que reclame la independencia y completa seguridad del edificio declarado monumento nacional, para que al llevarse a cabo las obras necesarias a aquel objeto no sufra el menor detrimento su integridad y belleza artística.

**6.2.9. La obligación de conservar el Monumento Nacional, incluso en aquellas partes que hubieran sido adquiridas por el dominio privado.**

Al declarar un bien inmueble como Monumento Nacional, en caso de que pasara a dominio privado tenía que ser respetado su identidad artística e histórica. En el Expediente incoado por el Ministerio de Hacienda sobre cesión de una parcela de terreno lindante con el Monasterio de Guadalupe a la Comunidad de la Orden de San Francisco, encargada de su custodia<sup>2789</sup>. En el informe de 1º de enero de 1918 de la Academia de Bellas Artes de San Fernando se precisaba la conservación del inmueble, al formar el Monasterio de Guadalupe *un conjunto armónico tan artística y bella construcción. Al ser declarado el Monasterio Monumento Nacional en 1º de marzo de 1879, sin hacer excepción alguna, debe conceptuarse el Monumento todo, así lo que pertenece al Estado como lo que, habiendo sido enajenado por éste procedente de la*

<sup>2789</sup> Academia. Boletín de la Academia de San Fernando, Segunda Época, Madrid, 1915, Año IX, Tomo IX, pp.9-10.



*desamortización eclesiástica, es de propiedad particular, pero que forma parte del Monasterio y reúne condiciones artísticas para que el Estado tenga derecho a impedir que el propietario haga nada que pueda menoscabar el valor y la importancia artística o histórica del Monumento, derecho que ha venido a reforzar los artículos 3º y 4º del Reglamento de la Ley de Excavaciones, que prohíbe en absoluto, aun a los propietarios, el deterioro de las ruinas y antigüedades y la realización de reformas que contradigan el espíritu de cultura y de estudio; y claro está que si el Estado tiene el derecho y el deber de impedir que los propietarios hagan nada que puedan ocasionar daños en un Monumento de interés artístico declarado Nacional, con mayor razón los deben evitar en los que son de su propiedad. La Comunidad de religiosos franciscanos pediría que fuese vendido una parcela de terreno que lindaba con el Monasterio e incluso comprende partes del mismo que están en ruina, por lo que se precisa que su enajenación traería como consecuencia, que hubiera de hacerse con la cláusula de la prohibición de levantar construcción ninguna que pudiera perjudicar al Monasterio, lo cual disminuiría considerablemente su ya escaso valor. Si se enajenara sin ninguna restricción, el comprador podría edificar en dicho terreno, sin más obligación que la muy limitada que pudieran imponerle las servidumbres de paso, vistas y luces, con lo que se perjudicaría notablemente al Monumento en su aspecto exterior, pues el cumplimiento de estas servidumbres sólo le obligaría a dejar un reducido espacio sin edificar delante de los huecos de la fachada. La parcela de que se trata tiene además escasísimo valor, como lo prueba que, el que lo adquirió cuando fue enajenado como bienes de la desamortización eclesiástica, haya preferido perder tres plazos que tenía abonados a continuar pagando los que les restaban, y parece procede de un proyecto abandonado de abrir una calle a través del Monasterio, demoliéndose para ello la parte del mismo que hoy forma la parcela objeto de este expediente. Por estas razones, la Academia tiene el honor de informar que en la declaración de Monumento Nacional debe conceptuarse comprendida la referida parcela y que, por lo tanto, procede acceder a la solicitado por la Orden Franciscana encargada de la custodia del Monasterio, del cual debe considerarse como formando parte, pero que la cesión debe hacerse en el mismo concepto que el resto del Monasterio perteneciente al Estado, cuya conservación y custodia está encomendada a la citada Orden, y con la expresa condición de que no pueda en ningún tiempo levantarse en ella edificaciones que puedan ocultar o perjudicar el Monumento, pudiendo sólo autorizarse la reconstrucción de lo que habiendo pertenecido al Monasterio se halla comprendido en la referida parcela y en completo estado de ruina. Si alguna vez se creyera conveniente remediar este daño, podrían autorizarse las obras, pero previa la presentación del oportuno proyecto y su aprobación por el Estado.*

### **6.3. Una nueva figura jurídica: Los Monumentos Nacionales Arquitectónicos Artísticos. La ley del 4 de marzo de 1915.**

La promulgación de la Ley de 4 de marzo de 1915 nace en un contexto muy específico cual fue la protección del Patrimonio Arquitectónico, auspiciado quizás por el papel que los propios arquitectos estaban desempeñando a raíz de instauración del colegio oficial de Arquitectura. La idea de la defensa de una arquitectura nacional vendría defendida ya en el VI Congreso Nacional de Arquitectos que se celebraría en San Sebastián entre los

días 12 y 19 de septiembre de 1915, en los que los arquitectos Aníbal González y Leonardo Rucabado defenderían la necesidad de definir una arquitectura nacional, planteando entre otros puntos, que siendo la arquitectura un arte tradicionalista, puesto que tiende a perpetuar las formas pasadas, es muy conveniente, para la buena orientación de la arquitectura nacional, el estudio de nuestros estilos históricos, por constituir la interpretación española, en cada época, del arte arquitectónico (2º), se defendería que las Asociaciones de Arquitectos, por sí, o cooperando a la labor de las Comisiones de Monumentos para que se divulgara el estilo nacional<sup>2790</sup>. Sin embargo, en la historiografía jurídica, no se ha analizado con detenimiento la impronta que pudo dejar en la evolución de la tutela pública del Patrimonio Monumental. Así Leonardo Sánchez Mesa la cita como una Ley que gozó de una muy escasa aplicabilidad, dada la ausencia de desarrollo de su reglamento ejecutivo y el profundo respeto en ella manifestado hacia los derechos del propietario, a lo que añade como matiz novedoso, que gozó de una notable importancia como precedente de la ley de 1933, en cuanto configura su ámbito objetivo de aplicación atendiendo a un concepto genérico como el de monumentos arquitectónicos artísticos y articula mecanismos y medidas de protección que, aunque tímidas, constituyen la base de cuanto se desarrollará en la citada ley republicana<sup>2791</sup>. En una línea distinta estarían algunos arquitectos coetáneos a la publicación de la ley, como Martorell, quien resaltó en la revista Arquitectura las novedades que había representado la nueva disposición: *La ley constituye un arma poderosa, aplicada ya con éxito, para evitar en momento de peligros la destrucción de los monumentos: basta incoar un expediente de catalogación, para que las autoridades estén obligadas a velar por la integridad del monumento, al menos hasta que recaiga la resolución del Ministerio de Instrucción Pública; las Corporaciones Oficiales tienen el derecho de tanteo para la compra de todo o detalles interesantes que contenga. Gracias a esta ley se han evitado, por el momento el derribo, entre otras construcciones históricas, del castillo de Alcuas (Valladolid) y del Corral del Carbón (Granada), antigua alhóndiga árabe en Granada. Sin embargo, insistía en que el problema de la ejecución de la ley estaba en el ámbito del propio derecho de propiedad privada y de las corporaciones públicas, llegándola a calificarla de insuficiente, embrionaria, la relativa a monumentos históricos y antigüedades, ya que ninguna servidumbre grava la propiedad de Corporaciones y particulares, único medio de lograr resultados eficaces<sup>2792</sup>.*

Más contundente sería Leopoldo Torres Balbas al afirmar en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos, que expondría que la ley de 1915 había venido a complicar aún más la pueril legislación sobre Patrimonio

<sup>2790</sup> Las conclusiones del VI Congreso Nacional de Arquitectos están recogidos en la Construcción Moderna, 20, Madrid, 30 de octubre de 1913, pp.305-311; El Tema V del citado Congreso versaba sobre Orientaciones para el resurgimiento de una Arquitectura Nacional, que está recogido en La Construcción Moderna, 8, Año XIV, Madrid, 30 de abril de 1916, pp.125-129.

<sup>2791</sup> SANCHEZ MESA, Leonardo, p.145.

<sup>2792</sup> MARTORELL, Jeroni, 1919, p.154.

Monumental, al añadir una categoría más de monumentos, que complicaba aún más la compleja clasificación de los bienes inmuebles que se querían tutelar. Calificaría incluso de pueril el derecho de tanteo del Estado que planteaba la novedosa disposición legal tutelar del Patrimonio Monumental, considerando a las ley de 1911 y el Reglamento de 1912 más innovadora en la cuestión del derecho de la propiedad privada: *Establece también un derecho de tanteo para su compra en casa de derribo, a favor del Municipio, la Provincia y el Estado, durante el periodo de tres meses y prohíbe la exportación al extranjero de los Monumentos registrados. Esta ley ya se ha aplicado en algunos casos. Desgraciadamente no hace más que aplazar la destrucción de los edificios, pues es pueril pensar que nuestros Ayuntamientos, Diputaciones y Estados, ejerciten el derecho de tanteo*<sup>2793</sup>. El proceso de configuración de la ley no fue muy lento, ya que en pocos meses había sido aprobada. En el análisis de la ley se resalta la pretensión tutelar de los bienes inmuebles de interés arquitectónicos-artísticos de dominio privado, con la inclusión de un derecho de tanteo, que la falta de presupuesto en la mayoría de las veces quedó en agua de borrar.

### 6.3.1. El proceso de la aprobación de la ley.

El Duque del Infantado presentaría una proposición de ley al Congreso el 28 de noviembre de 1914, constando de 8 artículos a los que se unirían dos adicionales. La Exposición de Motivos se iniciaba con el ya tradicional lamento de las pérdidas del patrimonio histórico y artístico: *Entre las fuentes de riqueza que contribuyen en el día a atraer con mayores facilidades el capital extranjero está en todas las naciones de histórica grandeza la conservación y fomento de sus tesoros artísticos. Y es muy lamentar que la desidia con que la generación pasada abandonó la conservación de los bienes muebles arqueológicos haya sido causa de que la mayor y mejor parte de éstos hayan emigrados de nuestro suelo para enriquecer los museos extranjeros.* Como novedad se da mayor importancia al patrimonio inmueble, digna de una especial protección: *Más con ser ello muy doloroso, lo sería aún más que dicha emigración se extendiera a los mismos monumentos arquitectónicos (que parece que con lazos más fuertes deben permanecer siempre en el suelo nacional).* Sin duda alguna el aspecto más renovador de la ley estaría en el fomento a la participación de la iniciativa privada en la protección de los bienes inmuebles, fundamentando en el hecho de haber fracasado la exclusiva iniciativa pública: *A tratar de evitarlo tiende la iniciativa de los Diputados que suscriben, que al propio tiempo estiman necesario estimular por diversos medios la afición al arte en nuestro país, despertando la actividad privada para que coadyuve con las provincias y Municipios y demás Corporaciones y Asociaciones de todo género a la misión del Estado, que la práctica ha demostrado ser imposible de cumplir dentro de la escasez de los recursos que conceden los presupuestos.* Como medida estimuladora se propondría la cesión temporal que el Estado considerase necesario: *Para ello estiman también necesario que el Estado*

---

<sup>2793</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo "Legislación, inventario gráfico y organización de los Monumentos Históricos y Artísticos de España", en VIII Congreso Nacional de Arquitectos, Zaragoza, 1919, p.5.

*quede facultado para poder ceder temporalmente todos aquellos monumentos nacionales, a los que la declaración de tales sólo ha servido para anticipar su completa ruina, a favor de aquellas entidades oficiales o privadas que se sustituyan en las obligaciones que el Estado no ha podido aún satisfacer, teniendo como objetivo primordial la conservación del patrimonio artístico, contribuyendo al desarrollo del turismo e iniciando un camino que acaso pueda tener utilísimos y más provechosos desarrollos.*

Poco tiempo después el propio Duque del Infantado renunciaría a apoyarla, aunque no fue obstáculo para que fuera tomada en consideración, anunciándola que pasaría a las secciones para nombramiento de Comisión<sup>2794</sup>. La Comisión sería nombrada en la sesión de 9 de diciembre de 1914, quedando constituida por los diputados Aparicio, Maura Gamazo, el Duque del Infantado, Senante, Cambó, Burell y Giner de los Ríos<sup>2795</sup>. El 16 de enero de 1915 se produce una interpelación del diputado Soriano al recién nombrado Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Conde de Esteban Collantes, que le reclama con tintes irónicos una pronta aprobación de una ley de protección de obras de arte<sup>2796</sup>. Unos días después sería presentado en la sesión del Congreso del 20 de enero de 1915, el Dictamen de la Comisión, cuyo articulado prácticamente era idéntico a la definitiva ley, excluyendo los dos primeros artículos que sería objeto de modificaciones, especialmente en torno al concepto de la figura jurídica que se intentaba legislar. El 21 de enero sería leído, y sin discusión fue aprobado, el dictamen de la comisión sobre la proposición de ley de protección de monumentos arquitectónicos-artísticos, anunciándose por el Sr. Secretario que el proyecto aprobado pasaría a la Comisión de corrección de estilo y se sometería a la aprobación definitiva del Congreso<sup>2797</sup>. El 22 de enero de 1915 sería aprobado el proyecto de ley sobre protección de monumentos arquitectónicos-artísticos, dejando sin modificar los dos primeros artículos que se había presentando en el dictamen<sup>2798</sup>. El Senado anunciaría al Congreso que habiendo aprobado con modificaciones el proyecto de ley, formarían parte de la Comisión Mixta encargada de conciliar las opiniones de ambos cuerpos Colegisladores los senadores Francisco Bengamín, Duque de la Roca, Torcuato Luca de Tena, Juan Antonio Cavestany, Elías Tormo, Marqués de la Vega Inclán y el Marqués de Laurencín<sup>2799</sup>. El Proyecto de Ley remitido por el Senado se presentaría el 5 de febrero de 1915, habiéndose sustituido el segundo párrafo del artículo adicional, estando firmados por Senadores D. Francisco Bergamín, Duque de la Roca, D. Torcuato Luca de Tena, D. Juan Antonio

<sup>2794</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Sesión de 1º de diciembre de 1914, p.2998.

<sup>2795</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Sesión de 9 de diciembre de 1914, p.3184.

<sup>2796</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, núm.118, 16 de enero de 1915, p.3726.

<sup>2797</sup> Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, núm.122, 21 de enero de 1915, p.3838.

<sup>2798</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Sesión de 22 de enero de 1915, Núm.123, p.3867.

<sup>2799</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Sesión del 5 de febrero de 1915, Núm.134, p.4187.

Cavestany, D. Elías Tormo, Marqués de la Vega Inclán y Marqués de Laurencín. Un día después, sería presentado el Dictamen de la Comisión Mixta, teniendo como presidente Francisco Aparicio y Vocales Francisco Bergamín, el Duque de la Roca, Juan Antonio Cavestany, el Duque del Infantado, Hermenegildo Giner de los Ríos, el Marqués de Vega Inclán, Elías Tormo, Gabriel Maura, y como secretario El Marqués de Laurencín. Sin discusión quedarían aprobado el dictamen de la Comisión del proyecto de Ley en la sesión de 8 de febrero de 1915<sup>2800</sup>, para finalmente quedar aprobada el 15 de febrero de 1915, siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Saturnino Esteban Miguel y Collantes<sup>2801</sup>.

En la Exposición del Real decreto de 25 de agosto de 1917 precisaba la diferencia entre la nueva ley con la promulgadas anteriormente el 7 de julio de 1911, distinguiendo la identidad jurídica de los bienes que debían de ser protegidos: *La ley dictada en 4 de marzo de 1915 acerca de la conservación de Monumentos artísticos e históricos, guarda íntima relación con la 7 de julio de 1911, sobre excavaciones y antigüedades, que siendo el mismo fin, pudiendo afirmarse que aquella es el natural y obligado cumplimiento de ésta, puesto que no se limita a las ruinas de carácter artístico o arqueológico que existan o se descubran y a los edificios de esa misma índole que resulten abandonados a los estragos del tiempo, sino que se extiende a todos los Monumentos que tengan interés histórico o artístico, cualquiera que sea su clase.* La Ley de 1915 va a incorporar unas importantes novedades en el ámbito de la protección jurídica del Patrimonio Arquitectónico, regulando por primera vez el objeto concreto de protección, el Monumento Histórico Nacional, así como la determinación de importantes medidas de exportación, de fomento, así como el carácter formal de su determinación

### **6.3.2. Un nuevo bien jurídico: El Monumento Arquitectónico Artístico.**

Al igual que ocurría en el caso de la Ley de 1911 se observa una imprecisión a la hora de conceptualizar un bien inmueble como Monumento Arquitectónico-Artístico. En el artículo 1º de 1915 se definía como tal *los de mérito histórico o artístico cualquiera que sea su estilo*, en cierta forma una pervivencia de la legislación decimonónica, proyectada por la impronta que había tenido hasta este momento las Reales Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia. Al mismo tiempo la selección patrimonial no excluía a ningún estilo, como en el caso de la Ley de 1911, por lo que no se impondría ninguna limitación temporal. Con el objeto de que no hubiera inseguridad jurídica a la hora de definir su valoración de un bien se recurría a su declaración, por lo que tanto los valores históricos como artísticos tenían que reconocerse en el objeto. La distinción de intereses o valores exigidos a los

---

<sup>2800</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Sesión del 8 de febrero de 1915. Núm.136, p.4253.

<sup>2801</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Apéndice 8º al Núm. 1º. Sesión de 5 de noviembre de 1915.



bienes para ser considerado objeto de protección se perfila en función a la naturaleza material de los mismos, por lo que se puede observar un distinto tratamiento entre los restos arqueológicos y los monumentos arquitectos, apuntando Barrero como para la protección de los primeros, para los que se redactan leyes propias, es *el dato de la antigüedad su valor central, una antigüedad que remite, en última instancia, al valor histórico*, mientras que para los monumentos es el *mérito histórico o artístico, cualquiera que sea su estilo*, el que justifica la protección. Por lo tanto para que un bien fuera protegido tenía que ser incluido en un expediente incoado al efecto. Como apunta José Fariña, *por primera vez aparece de forma taxativa algo que será una constante a lo largo de las sucesivas normas de protección del Patrimonio Cultural, hasta llegar al momento actual: el criterio formal, como medio para conocer si un bien está afectado o no*<sup>2802</sup>. La declaración formal de los monumentos a proteger en opinión de Tomás Ramón Fernández es donde se apoya toda la regulación articulada de la misma<sup>2803</sup>. A partir de ahora para que un bien fuese considerado digno de protección, tenía que poseer no solo *la presencia en él de algunos de los valores protegido por la norma, sino que se requiere, también, que éstos hayan sido formalmente constatados a través del procedimiento en la misma contemplado*<sup>2804</sup>.

Sin duda alguna la declaración de Monumento arquitectónico-artístico representa una categoría menor al de Monumento Nacional. En los informes de la Real Academia de la Historia y de Bellas Artes se puede apreciar un gran número de casos en que se consideraba que los bienes inmuebles incoado no eran dignos de ser declarados Monumentos Nacionales pero si encerraban valores que fundamentaba su inclusión en la nómina de Monumentos Arquitectónicos-Artísticos. Así en el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 14 de mayo de 1919, se desestimaría la declaración de Monumento Nacional de la llamada Casa del Pópulo de Baeza, por no encerrar los valores históricos y artísticos preceptuados para ellos, pero sin embargo se muestra favorable a que sea declarado monumento arquitectónico-artístico: *Viniendo ya a tratar la valía del edificio, que es lo que importa a los fines solicitado por el Ayuntamiento de Baeza (...) En cuanto a su valor artístico, no puede negarse que reúne el carácter genuino de nuestras rancias construcciones del siglo XVI (...) Pero no hay en ella ni la magnitud de la composición, ni la grandeza del concepto, ni la novedad, rareza o belleza de los elementos, ni la excepcional mano de obra, ni, en fin, a sus piedras va unido el nombre de un artista famoso, para cuya biografía sea un documento de valía. No llega, pues, al mérito sobresaliente; quedase en la categoría de un lindísimo ejemplar que ha de sumarse a tantos otros de nuestro*

<sup>2802</sup> FARIÑA TOJO, José *La evolución del patrimonio urbano. Instrumentos normativos*. Madrid, 2000, p.36.

<sup>2803</sup> FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón "La legislación española sobre el Patrimonio Histórico-Artístico. Balance de la situación de cara a su reforma". *Revista de Derecho Urbanístico*, nº 60, 1978, p.16.

<sup>2804</sup> BARRERO RODRIGUEZ, Concepción, 1990, p.61.

*Renacimiento plateresco. Por eso merece los mayores cuidados de conservación y respeto. Más para ello no es precisa la declaración de monumento nacional; basta su inclusión en la lista de los edificios inventariados como artísticos, aplicándole la ley de 4 de marzo de 1915*<sup>2805</sup>. De la misma manera podemos observar un amplio número de oficios cursados por la Real Academia de la Historia en el que se desestimaba la declaración de Monumento Nacional, proponiéndose al mismo tiempo la posibilidad de que se considerase monumento arquitectónico-artístico o edificio artístico. En el Oficio de 31 de diciembre de 1908 sería desestimada la conveniencia de que el convento de San Vicente Ferrer en Manacor (Baleares) fuese declarado Monumento Nacional, aunque mismo tiempo se señalaba la posibilidad de que fuera considerado monumento arquitectónico-artístico: *Incoado expediente sobre declaración de monumento nacional del convento de San Vicente Ferrer, de la villa de Manacor (Baleares) fue resuelto por Real Orden de 14 de julio de 1916 en sentido negativo, y teniendo como tiene, esta resolución el carácter de firme y definitivo, no puede producir efecto en el mismo el informe que sobre dicho asunto remite a este Ministerio con fecha 11 del actual la docta Corporación (...) ahora bien; como en el mencionado informe propone esa Real Academia que el claustro del referido convento, caso de no ser declarado Monumento Nacional, sea considerado como edificio artístico, idea que coincide en cierto modo con el dictamen de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, opuesta a la declaración de Monumento Nacional, esta Dirección General ha tomado el acuerdo de remitir ambos informes a la Junta de Excavaciones y Antigüedades para que, en uso de las facultades que le están conferidas por las disposiciones vigentes, determinen acerca de si procede la inclusión del edificio en el catálogo de artísticos.*

En la Real orden de 29 de septiembre de 1919 declarando Monumento arquitectónico-artístico el convento de San Francisco de Betanzos (Coruña) se define el fundamento clasificador de un bien inmueble entre ser declarado Monumento Nacional o Monumento Arquitectónico-Artístico. Sería desestimado la declaración de Monumento Nacional por parte de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, al dictaminar que *si bien la declaración se ha hecho con algunos monumentos similares a la iglesia de Betanzos con el fin de salvarlos, lo fue antes de ponerse en vigor la expresada Ley de 4 de marzo de 1915, acerca de la conservación de monumentos, no siendo onerosa la declaración de monumento artístico conforme a dicha ley y prescribiendo una lógica intervención del Estado, a lo que se añadía el reconocimiento que representaba para un bien ser declarado Monumento Nacional: Considerando que la declaración de Monumento Nacional a favor de un edificio ha sido considerado como siempre como máximo honor consagrado al mismo y el reconocimiento supremo de su mérito artístico o de su significación histórica, o de ambas circunstancias a la vez, previo el dictamen unánime de las Corporaciones llamadas a emitirlos, reafirmando cual era el verdadero objetivo de la promulgación de la Ley al afirmar que su*

---

<sup>2805</sup> Informe acerca de la declaración de Monumento Nacional de la llamada Casa del Pópulo de Baeza en *Boletín de la Real Academia de San Fernando*, Tercera Época, Madrid, 30 de junio de 1919, pp.130-132.

promulgación había venido a llenar una necesidad tan reconocida, cual es la declarar bajo la protección del Estado aquellos edificios que merecen y deben obtenerla, y que, sin embargo, no reúnen las condiciones supremas exigidas para su declaración de Monumento Nacional.

Los bienes inmuebles declarados Monumentos Arquitectónicos-Artísticos serían los siguientes:

- Real Orden de 15 de marzo de 1919 declarando Monumento arquitectónico artístico de la iglesia de San Nicolás (Gerona).
- Real orden de 22 de marzo de 1919 declarando monumento arquitectónico-artístico el claustro de la iglesia de San Vicente Ferrer (Manacor, Baleares).
- Real orden de 29 de septiembre de 1919 declarando Monumento arquitectónico-artístico el convento de San Francisco de Betanzos (Coruña).
- Real orden de 30 de septiembre de 1919 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Monasterio de Comendadoras de Santiago (Toledo).
- Real orden de 22 de noviembre de 1919 declarando Monumento Arquitectónico-Artístico la fachada, primera crujía y capilla del Hospicio de Madrid.
- Real orden de 22 de noviembre de 1919 declarando Monumento Arquitectónico-Artístico la casa del Pópulo (Baeza, Jaén)
- Real orden de 22 de noviembre de 1919 declarando monumento arquitectónico artístico la portada de la derruida iglesia de San Miguel (Jaén)
- Real orden de 3 de diciembre de 1919 declarando monumento arquitectónico artístico el llamado Cuarto Real de Santo Domingo (Granada).
- Real orden de 3 de diciembre de 1919 declarando monumento arquitectónico artístico la llamada Casa de Tiros (Granada).
- Real orden de 3 de diciembre de 1919 declarando monumento arquitectónico artístico la llamada Casa de Chapiz (Granada).
- Real orden de 3 de marzo de 1920 declarando Monumento Arquitectónico-Artístico la Casa-Posada de la Santa Hermandad, sita en Toledo.
- Real orden de 15 de marzo de 1920 declarando Monumento arquitectónico-artístico del edificio denominado hospital de Santa María, de la ciudad de Lérida.
- Real orden de 31 de marzo de 1920 declarando Monumento arquitectónico-artístico las ruinas del Circo romano (Toledo).

- Real orden de 15 de mayo de 1920 declarando Monumento arquitectónico-artístico la Casa posada, llamada de la Sangre, sita en la ciudad de Toledo.
- Real orden de 23 de julio de 1920 declarando Monumento arquitectónico-artístico el palacio de los Condes de Oliva (Gandía, Valencia).
- Real orden de 27 de julio de 1920 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Santuario de Mur, partido judicial de Tremp (Lérida).
- Real orden de 30 de agosto de 1920 declarando Monumento arquitectónico-artístico el castillo de San Marcos (Puerto de Santa María, Cádiz).
- Real orden de 18 de enero de 1921 declarando Monumento arquitectónico-artístico las ruinas del convento de San Antonio de la villa de Mondéjar (Guadalajara).
- Real orden de 2 de febrero de 1921 declarando Monumento arquitectónico-artístico la casa sita en Salamanca en la plaza de Fray Luis de León, conocida con el nombre de Casa de los Abarca o de los Abarca-Maldonado.
- Real orden de 2 de febrero de 1921 declarando monumento arquitectónico artístico el Castillo de Almansa (Albacete).
- Real orden de 25 de mayo de 1921 por el que se declara Monumento arquitectónico artístico los torreones conocidos con el nombre del Alamín y de Alvaz-Fañez (Guadalajara).
- Real orden de 25 de mayo de 1921 declarando Monumento arquitectónico-artístico la llamada Casa de las Torres (Ubeda, Jaén).
- Real orden de 28 de mayo de 1921 declarando Monumento histórico-arquitectónico a la Ermita de San Gil de Mediavilla, del pueblo de Luna (Zaragoza).
- Real orden de 21 de diciembre de 1921 declarando Monumento arquitectónico-artístico las murallas con sus puertas y Castillo de la plaza de Fuenterrabia (Guipúzcoa).
- Real Orden de 17 de enero de 1922 declarando Monumento Arquitectónico Artístico la casa de la Mesa (Toledo).
- Real orden de 17 de enero de 1922 declarando Monumento Arquitectónico Artístico la casa número 19 de la calle de Ciudadanos (Gerona).
- Real orden de 2 de febrero de 1922 declarando Monumentos Arquitectónicos-Artísticos las ruinas del castillo de Escalona (Toledo).
- Real orden de 6 de julio de 1922 disponiendo se declaren Monumentos arquitectónicos-artísticos según solicita la Comisión Provincial de Monumentos de Granada.

- Real orden de 20 de julio de 1922 declarando Monumento arquitectónico-artístico la portada existente en el Torreón del Archivo General Central del Reino, sito en Alcalá de Henares.
- Real orden de 14 de noviembre de 1922 declarando Monumento arquitectónico-artístico la fachada del edificio sito en la calle de San Torcuato, de la ciudad de Zamora, denominado Palacio de los Momos.
- Real orden de 21 de noviembre de 1922 declarando Monumento Arquitectónico-artístico la iglesia parroquial de Santa María del Salvador (Chinchilla, Albacete).
- Real orden de 21 de noviembre de 1922 declarando Monumento arquitectónico artístico el edificio denominado Contraste (Murcia).
- Real orden de 24 de noviembre de 1922 declarando Monumento arquitectónico-artístico los restos de la iglesia de San Martín (Niebla, Huelva).
- Real orden de 12 de febrero de 1923 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Castillo de la Aguzadera (El Coronil, Sevilla)
- Real orden de 23 de junio de 1923 declarando monumento arquitectónico-artístico la iglesia de Ujo (Oviedo)
- Real orden de 23 de junio de 1923 declarando monumento arquitectónico-artístico la ermita de San Segundo, las iglesias de San Andrés y Santo Domingo y el palacio de D. Blasco Núñez Vela, de Avila.
- Real orden de 2 de julio de 1923 declarando Monumento arquitectónico-artístico la iglesia vieja (Espluga de Francolí, Tarragona).
- Real orden de 12 de julio de 1923 declarando Monumento arquitectónico-artístico el edificio denominado el Consulado (Málaga)
- Real orden de 4 de agosto de 1923 declarando Monumento arquitectónico-artístico la Casa de Jáuregui (Vergara, Guipúzcoa).
- Real orden de 9 de agosto de 1923 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca)
- Real orden de 11 de agosto de 1923 disponiendo se declare Monumento Arquitectónico-artístico el Palacio de los Condes de Miranda, sito en Peñaranda del Duero (Burgos).



### **6.3.3. La intervención de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en los expedientes de incoación sobre la declaración de Monumento arquitectónicos-artísticos.**

Con la promulgación del Real decreto de 25 de agosto de 1915 se dispondría en su artículo 1º que la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades interviniera en los expedientes que se incoaran sobre conservación de Monumentos históricos y artísticos. En la Exposición de Motivos se señalaba el papel que debía representar tal organismo administrativo a la hora de declarar a un bien como Monumento Nacional: *Conviene, pues, que una sola entidad o Corporación, con carácter consultivo o de propuesta, se encargue del cumplimiento de ambas leyes, y siendo la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades la que tiene a su cargo al entender en los asuntos a que se refiere la ley de 7 de julio de 1911, parece lógico que sean sometidos a la misma aquellos otros que guardan relación con la de 4 de marzo de 1915, si bien aumentando de Vocales de dicha Junta, para que pueda sin dificultad atender al mayor trabajo que se le impondrá con esta medida.* Con esta finalidad se ampliaría a doce el número de Vocales que han de constituir la referida Junta (art.2). Posteriormente, con **el Real decreto de 24 de agosto de 1917** por el que se dispondría *que la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, intervenga en lo sucesivo en los expedientes que se incoen sobre conservación de Monumentos Históricos y Artísticos, elevando a 12 el número de vocales que han de constituir la referida Junta,* dejando claro en su Exposición de Motivos que las atribuciones de este órgano no se limitaban *a las ruinas de carácter artístico o arqueológico que existan o se descubran y a los edificios de esa misma índole que resulten abandonados a los estragos del tiempo, sino que se extiende a todos los monumentos que tengan interés histórico o artístico, cualquiera que sea su clase,* al considerarse que *la Ley dictada en 4 de marzo de 1915 acerca de la conservación de monumentos artísticos e históricos, guarda íntima relación con la de 7 de julio de 1911 sobre excavaciones y antigüedades, que siendo el mismo fin, pudiendo afirmarse que aquella es el natural y obligado complemento de ésta,* por lo que convenía que una sola entidad o Corporación, con carácter consultivo o de propuesta, se encargase del cumplimiento de ambas leyes, por lo que *siendo la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades la que tiene a su cargo el entender en los asuntos a que se refiere la Ley de 7 de julio de 1911, parece lógico que sean sometidos a la misma aquellos otros que guardan relación con la de 4 de marzo de 1915,* por lo que se incrementaría el número de Vocales de dicha Junta, *para que pueda sin dificultad atender al mayor trabajo que se impondrá con esta medida.* Un día después, el 25 de agosto de 1917 se promulgaría una nueva Real Orden disponiéndose que la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, a la que corresponde entender en los asuntos relacionados con la Ley de 1911, intervendría igualmente en lo sucesivo en los expedientes que se incoasen por virtud de la Ley de 4 de marzo de 1915, sobre conservación de monumentos históricos y artísticos (art.1), para lo que se ampliaría hasta un número de doce los Vocales que la constituyen (art.2).

El papel encomendado a la Junta Superior de Excavaciones sería criticado en gran número de ocasiones por la Real Academia de la Historia y de Bellas Artes, como queda reflejado en el **Oficio del 31 de julio de 1919 de la Comisión de Monumentos de Barcelona del 31 de julio de 1919** en el que se criticaba la pérdida institucional de las Reales Academias en la declaración de los Monumentos Históricos y Artísticos, concretamente en este caso en la declaración de Monumento Arquitectónico Artístico de la Casa Gremial del Arte Mayor de la Seda (Barcelona). Como así constaba en el Oficio la declaración de Monumento Arquitectónico-artístico del edificio perteneciente al Colegio del Arte Mayor de la Seda, sito en esta ciudad de Barcelona se había realizado dictado no solo *sin audiencia de la RR.AA. de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, ni de esta Comisión provincial de Monumentos que las representa, sino, lo que es más grave, con desconocimiento del Real Decreto de 22 de enero del pasado año 1918, en que previo informe entre otros de esta Comisión, evacuado en el sentido de que dicho edificio es una modestísima vulgaridad, no distinguiéndose por ningún carácter monumental y hallándose, por tanto exento de valor intrínseco suficiente para compensar el trastorno que su conservación ocasionaría se aprobó definitivamente el proyecto formado por el Ayuntamiento de Barcelona para la reforma interior de esta ciudad.* Al mismo tiempo advertía los problemas administrativos causados por la existencia de un paralelismo administrativo entre órganos que en muchas ocasiones resolvían un mismo expediente incoado, a veces incluso contradictorios: *Dicha R.O. representa, en el orden administrativo, una contradicción, y para las Reales Academias y sus delegados, las Comisiones Provinciales de Monumentos, una advertencia y un recuerdo de la necesidad en que están de preocuparse de la preterición que desde el año 1911 ha sufrido, con la creación de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, agravada por los preceptos de su Reglamento, preterición que es precisamente lo que ha hecho posible aquella contradicción entre ambos ministerios, acordando uno definitivamente el derribo y otro después la conservación.* Se sugería que estas contradicciones a la hora de declarar un bien inmueble como monumento arquitectónico-artístico podía solventarse retomando el papel que las Comisiones de Monumentos y las Reales Academia habían perdido: *Porque si se hubiera, como estaba dispuesto antes de aquellas disposiciones, oído a las RR.AA. y sus delegados las Comisiones Provinciales de Monumentos Artísticos, éstas, consecuentes con su criterio ya expresado, no hubiera informado por la declaración de monumento artístico de aquello que ya habían dicho debía derribarse por falta de valor intrínseco artístico suficiente para aconsejar su conservación. Bien sabe esta Comisión Provincial que oportunamente se preocuparon las RR.AA. de la situación desairada en que quedaban, por la Ley de 1911 y como sus protestas encontraron eco en el ministro del Ramo, que ofreció no hacer declaración de monumento artístico o Nacional sin informe de ellas, modificando la legislación en caso necesario. Más del cumplimiento de tal promesa, es testigo irrecusable la R.O. a que se refiere esta comunicación, que demuestra plenamente la necesidad de que vuelva las Academias sobre este asunto, y obtengan legislativamente, el reintegro a su misión casi secular, en lo que se refiere al patrimonio artístico de España. (...) y aprovechando, la ocasión, ahora que está el Parlamento en funciones, para obtener, por medio del*

*Excmo. Sr. Senador por la Academia, una modificación de la ley de 1911, en el sentido de deber aportarse a toda declaración de Monumento Nacional o artístico el informe de las RR.AA. de la Historia y de las Bellas Artes de San Fernando, las que, con, los necesarios antecedentes que le facilitarían sus delegados, las Comisiones Provinciales de Bellas Artes, podrán, con completo conocimiento de causa, aportar al expediente sus conocimientos especiales en la materia, garantía del mayor acierto en las sucesivas declaraciones (...).* En la revista *Alhambra* aparecía el 31 de agosto de 1917 unas notas donde se criticaba a la nueva institución, al perder protagonismo las instituciones tutelares tradicionales del Patrimonio Monumental, como habían sido las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia: *La Gaceta del 27 (1917) publica un Real decreto en que se dispone que la Junta superior de excavaciones y antigüedades, a la que corresponde entender en los asuntos relacionados con la ley de 7 de junio de 1911, intervendrá igualmente en lo sucesivo en los expedientes que se incoan por virtud de la ley de 4 de marzo de 1915 (...)* ¿para qué sirven las Reales Academias de la Historia y de las Bellas Artes y las Comisiones de Monumentos? ¿Para qué se dictaron las disposiciones y reglamentos de esas ridiculizadas comisiones? Si las Comisiones adolecen en la actualidad de defectos, nacidos en particular del menosprecio que generalmente se les tiene, reformase su organización, y díctese un nuevo reglamento, que sería mucho mejor que crear nuevos organismos (...) O suprimase de una vez esas Comisiones<sup>2806</sup>. Con la promulgación del **Real decreto de 25 de agosto de 1917** serían nombrados como Vocales de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades a Joaquín Herrero, Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; José Moreno Carbonero, Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Vicente Lamperez, Académico de Número de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando y Arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura Manuel Gómez Moreno, Académico de Número de la Real Academia de la Historia y Catedrático de Arqueología Árabe en la Universidad Central y Francisco de P. Álvarez-Osorio, Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y Jefe de tercer grado del Cuerpo facultativo de Archiveros.

#### **6.3.4. Los límites del derecho del propietario de bienes inmuebles declarado Monumento Arquitecto Artístico.**

Como señala Sánchez Mesa, la primera nota destacable es que el régimen de control y fomento de la conservación monumental previsto por la Ley tiene por destinatarios tanto a sujetos privados como a sujetos públicos (distintos del Estado), incluyendo en clara distinción el artículo 4 a Municipios, Diputaciones Provinciales, Corporaciones y Asociaciones reconocidas por la ley y particulares del artículo 5 que solamente alude a particulares y entidades. Nuevamente se asume la intervención del Estado en el dominio privado, pero en la realidad como ocurrió en algunos momentos en la ley de 1911, quedaba sometido a la sumisión voluntaria del propietario.

---

<sup>2806</sup> *La Alhambra*, Año XX, 31 de agosto de 1917, Núm.466, p.383.

**- Solicitud de autorización pública para el derribo de los bienes inmuebles: la distinción jurídica entre derribo y deterioro intencionado.**

Cabe distinguir en los términos de la ley entre deterioro y derribo intencionado del inmueble por parte de su propietario. La prohibición del deterioro intencionado del inmueble había sido regulado por el artículo 3º de la ley de 7 de julio de 1911 y 3º y 4º del Reglamento de 1º de marzo de 1912, como aparece reflejada en la **Real orden de 30 de septiembre de 1919** declarando Monumento arquitectónico-artístico el Monasterio de Comendadoras de Santiago (Toledo): *De conformidad con el art.3º de la ley de 7 de julio de 1911 y 3º y 4º del Reglamento de 1º de marzo de 1912, queda prohibido en absoluto el deterioro intencionado del Monumento, y cuando se realicen reformas que contradigan el espíritu de cultura y de estudio y conservación de las ruinas y antigüedades que inspiró la citada ley, podrá este Ministerio ordenar la inspección de las mismas y exigir, para autorizar su continuación, el informe favorable de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. En la Real orden de 29 de junio de 1918* en el que se disponía que fuera incluido en el Catálogo y Registro de edificios artístico que lleva la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, el palacio castillo de Belcaire (Gerona), *por el que se precisaba la prohibición del propietario del edificio referido el deterioro intencionado del mismo, aplicándose si a ello contraviniera las sanciones correspondientes* (2º). La prohibición del derribo intencionado parcial o total del edificio aparece regulada como novedad en el artículo 2º de la Ley de 1915: *La persona o entidad que desee derribar un edificio declarado arquitectónico artístico o respecto del cual esté incoado el expediente para obtener esa declaración, con arreglo al artículo anterior, solicitará el oportuno permiso del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Con ello se limitaba la absoluta libertad que había gozado el propietario de su inmueble, como queda reflejado en la Real orden de 22 de marzo de 1919* declarando monumento arquitectónico-artístico el claustro de la iglesia de San Vicente Ferrer: *Una vez hecha la anterior declaración e inscripción, deberá la persona o entidad que desee derribar el edificio catalogado solicitar el oportuno permiso del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sin el cual por ningún concepto podrá llevar a cabo el derribo del todo o parte del monumento.*

**- La acción del derecho de tanteo y retracto por parte del Estado y los conflictos de dominio del inmueble: El caso del Hospicio de Madrid.**

Serían el Municipio, la Provincia y el Estado los que tendrían el derecho de tanteo para la compra del mismo o de los elementos artísticos que lo integren, si su derribo no tuviese por objeto la reconstrucción en territorio nacional (art.2.2). Este derecho podrá ser ejercitado por dicho orden de preferencia y durante un periodo de tres meses para su adquisición, para su desmontaje y reconstrucción donde les convenga, o para su conservación en los Museos municipales, provinciales o nacionales (2.2), medida que como señala el profesor José Castillo con esta ley se sancionaría jurídicamente, no ya la

protección aislada de los monumentos, sino, al mismo tiempo, la desvinculación, total entre el bien inmueble y el contexto o lugar en que se ubica. Sin embargo, se estaba permitiendo una práctica usual en el tiempo, pero inaceptable en cualquier medida protección de patrimonio histórico contemporáneo. Sin embargo, en el caso de que ninguna de dichas entidades conviniere su adquisición, el propietario podría disponer libremente del inmueble (art.2.3), por lo que una vez más se dejaba a salvo el derecho de la propiedad privada.

Un caso paradigmático en la ejecución de la ley será el de Hospicio de Madrid, inmueble que había sido declarado Monumento Arquitectónico-Artístico, por Real Orden de 22 de noviembre de 1919, bajo la iniciativa de la Sociedad Central de Arquitectos y el informe favorable de Vicente Lamperez del 25 de junio de 1919. La Diputación de Madrid consideraría el derribo del inmueble como una medida necesaria, aunque habiendo sido declarado Monumento Arquitectónico-Artístico, lo había incluido como tal monumento en el Catálogo y Registro cedulario que lleva la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades desde la fecha de la Real Orden, por lo que obligaba a la persona o entidad que tuviera el propósito de derribar el monumento catalogado a solicitar el permiso de este Ministerio, sin el cual, por ningún concepto, podrá efectuarse el derribo de todo o parte del edificio, reservándose el Municipio, la Provincia y el Estado el derecho de tanteo en caso de venta; pero aplazando el destino que haya de darse a la parte del edificio declarada monumento arquitectónico-artístico para cuando llegue la ocasión oportuna. La Comisión provincial de la Diputación de Madrid, en 17 de diciembre de 1919, dirigió un oficio a la Dirección general, manifestando que al acordarse en 16 de enero de 1915 por la Diputación el derribo del actual Hospicio, *lo hizo en consideración al estado de ruina en que se encontraba, que ponía en peligro la vida de los asilados, lo que obligó a verificar el traslado de los mismos a los locales del Real Sitio de Aranjuez; puntualizándose que para la construcción del nuevo Hospital había ya adquirido terrenos en el Cerro del Pimiento, contándose para esta construcción con el derribo del actual edificio, y parcelación y enajenación de sus terrenos, teniendo ya formalizando la venta de parte de ellos al Ayuntamiento de Madrid, así como que todos los recursos, producto de la venta y derribo del actual Hospicio, se destinen a la construcción del nuevo edificio, aunque respetando la portada que en atención a su valor artístico se dispuso su exclusión de la subasta de demolición, fotografiándola y desmontándola con el mayor cuidado para que dicha joya artística pudiera ser colocada en el nuevo Hospicio. Se defendería por parte del organismo provincial que dichos acuerdos habían sido adoptados con anterioridad de la ley de 4 de marzo de 1915, por lo que la irretroactividad de la ley, al mismo tiempo que se precisaba que de no disponer la Diputación de los terrenos referidos se vería en la imposibilidad de realizar sus proyectos en el desarrollo de los intereses de la Beneficencia e impedidos el cumplimiento de las partes contraídos con el Ayuntamiento y con los Arquitectos autores del proyecto del nuevo Hospicio; por todo*



lo cual, en sesión de 10 de diciembre de 1915 acordó, con la declaración de urgencia, rogar a este Ministerio que se concretase la declaración de monumento artístico a la portada. La petición de la Diputación no sería aceptada a instancia del dictamen de la Comisión provincial por la Junta Superior de Excavaciones por Real Orden de 2 de marzo de 1920, resolviendo *que se excitase el celo, apelando a la cultura de la Diputación y Ayuntamiento de Madrid, para que en la venta concertada entre ambos procuraran convenirse en forma que se conservase la parte del Hospicio declarado Monumento artístico, instalando algunos de los muchos servicios, previa la reparación indispensable*. La Diputación Provincial de Madrid solicitaría al Ministerio la modificación de las Reales órdenes anteriores, por lo que se autorizase a la Corporación para proceder a la demolición inmediata y completa de todas las construcciones del edificio, sin perjuicio de las reglas que se dicten para el traslado y conservación de los elementos artísticos que integran la portada y fachada del mismo. El Ministerio de Instrucción Pública se dispuso excitar nuevamente el celo de las ilustres Corporaciones interesadas para que se conviniesen, con objeto de conservar en su actual emplazamiento las partes del Hospicio declarados Monumentos Artísticos, ateniéndose estrictamente a los resuelto por las Reales ordenes expresadas y llamando su atención hacia lo determinante en ellas dispuesto y sobre la responsabilidad de su incumplimiento, previniéndoles que la Administración Pública se halla dispuesta a ejercitar, en su caso, las acciones legales que la competan, especialmente la de tanteo. La acción legal del Ministerio de Instrucción Pública quedaba fundamentada en la propia disposición tal como establecía la propia Ley de 1915: 1º) Formulada en plazo legal: *Considerando que manifestado por este Ministerio, de manera terminante y bien definida, su propósito de ejercer la acción de tanteo a que se refiere el artículo 1º de la ley de 4 de marzo de 1915, es preciso consignar, a los efectos que pudiera derivarse de la misma, que dicha manifestación se halla hecha de una manera oficial dentro del plazo que el precepto legal señala, o sea en los tres meses, a partir de la notificación o demanda de permiso por parte del que se dice propietario del edificio para proceder a su derribo, que es el punto de partida de dicho plazo legal, e interpretada por el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de mayo de 1921, según doctrina fundamental de la misma sentada en el cuarto considerando, toda vez que el acuerdo de la Diputación Provincial, en que decidió esta Corporación manifestar a este Ministerio que procediera al derribo del edificio, fue trasladada por el Gobernador Civil en la provincia en oficio cuyo ingreso en este Ministerio consta en 3 de enero de 1921, y la Real orden declarando el propósito de ejercitar el tanteo el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes es de 2 de abril del mismo año;* 2º) El derecho de tanteo no debía de ser concedido a la Administración Pública por la Ley de 4 de marzo de 1915 por lo que no se precisaba que debía ser ejercitado ante los Tribunales de Justicia, *porque está acción civil solo puede y debe ser ejercitada por la Administración cuando se discutiera o negara por el propietario ese derecho del Estado, y nunca cuando, como en el caso presente, la Diputación Provincial reconoce ese privilegio, como ha manifestado en sus acuerdos y oficios dirigidos a este Departamento;* 3º) La necesidad de prueba de dominio: *Considerando que para poder pactar y obligarse con base firme y que lo pactado pueda tener eficacia, es imprescindible conocer probadamente la existencia del dominio a favor de la*

*Corporación oficial que pretende realizar la venta, para lo cual, y antes de que la Administración haga proposición alguna ni conteste a la formulada por la Diputación provincial, es preciso que tenga la justificación indudable del derecho de la propiedad alegado por la Diputación Provincial, y a este fin es necesario que esta Corporación, como cualquier otra entidad o particular que le estimaran interesados, remitan a este Ministerio para su examen y estudio prueba documental, conducente a demostrar este particular mediante copia autorizada de cuantos elementos integren la certeza de la existencia del pleno dominio; 4º) La obligación de la prueba de dominio por parte del propio Estado: Considerando que para completar dicha justificación deberá el Estado, por su parte, adquirir cuantos datos y antecedentes puedan conducir al esclarecimiento de este extremo importantísimo y esencial para llegar a un feliz término en la solución de este asunto, y este fin deberá interesarse por este Ministerio del de Hacienda que a la mayor brevedad posible manifieste si en el inventario de bienes propiedad del Estado, existente en la Dirección General de Propiedades, existe algún asiento referente al edificio de que se trata, y asimismo del de Gracia y Justicia que por medio de la Dirección general de los Registros obtenga del Registrador de la Propiedad correspondiente certificación toda la amplia y detallada posible respecto a la inscripción del inmueble desde su primer asiento.*

***- La adquisición de dominio por parte del Estado en los inmuebles declarados Monumentos arquitectónicos-artísticos: La Inscripción en el Registro de Propiedad como anotación marginal.***

Como había ocurrido en la legislación anterior, la cuestión de dominio se convierte en un obstáculo para la tutela pública del Patrimonio Inmobiliario Monumental, como aparece reflejado en la Real orden de 12 de febrero de 1923 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Castillo de la Aguzadera (El Coronil, Sevilla) que se incoase expediente sobre el estado de propiedad en que actualmente está dicho Castillo, y si resultase que carece de dueño, se incaute de él el Estado, encomendándolo a la Comisión provincial de Monumentos de Sevilla, a los fines de su conservación. La Inscripción en el Registro de Propiedad como anotación marginal se convertirá en una medida administrativa obligatoria sea cual fuera el dueño del inmueble, como se puede apreciar en la Real orden de 4 de agosto de 1923 declarando Monumento arquitectónico-artístico la Casa de Jáuregui (Vergara, Guipúzcoa), disponiendo que la Comisión de Monumentos históricos de Guipúzcoa haría de oficio las gestiones precisa para que en el libro correspondiente de Registro de la Propiedad donde se halle inscrito el edificio, se haga la anotación marginal de la nueva condición jurídica que el edificio adquiere por virtud de la declaración que efectúa esta Real orden (7º) o en la **Real orden de 11 de agosto de 1923** disponiendo se declare Monumento Arquitectónico-artístico el Palacio de los Condes de Miranda, sito en Peñaranda del Duero (Burgos), en la que se especificaba que *la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Burgos haría de oficio las gestiones precisa para que se haga en el libro correspondiente de Registro de la Propiedad, donde el edificio declarado Monumento arquitectónico-artístico esté inscrito, la oportuna anotación marginal que exprese la nueva condición jurídica que el edificio ha adquirido por la declaración de Monumento que del mismo*

*hace esta Real orden, subrayando la nueva situación jurídica en que se encontrara el inmueble declarado.*

**- Prohibición de exportar bienes de carácter histórico-artístico.**

En el artículo 3 se establecía la prohibición de exportación de cualquier inmueble, de manera parcial o total, medida que estaba ampliando a las que ya había sido tratada para el caso de los bienes muebles:(...) *en ningún caso podrán exportarse al extranjero el todo o parte de ningún monumento que no haya expresamente excluido del catálogo arriba citado de monumentos artísticos.* Al igual que ocurría en el artículo 2 se precisaría la posibilidad de desmontar una parte de los elementos de un monumento, por lo que nuevamente no se estaba teniendo en cuenta ni el entorno donde estaba situado el inmueble, ni la propia identidad del mismo.

**- Medidas de Fomento.**

Las medidas de fomento se preceptúan en la Ley de 1915 significaría una importante novedad en el ámbito legislativo español, ya que se establecía una recompensa económica tanto a las instituciones públicas como a los particulares. En el artículo 4 se establecía una recompensa económica en el caso de las instituciones públicas: *Los Municipios, las Diputaciones Provinciales, que se comprometan a la conservación, restauración o reconstrucción de los monumentos a que esta Ley se refiere, podrán disfrutar de hasta un 25% del presupuesto aprobado.* En el caso de los particulares, en opinión de García Enterría la inclusión del fomento como técnica de protección se debe de enmarcar dentro del respeto a la propiedad privada, ya que *contaba únicamente con la buena voluntad de los propietarios*<sup>2807</sup>. Sin embargo, Concepción Barrero difiere de esta opinión, al calificarla como un sistema de penetración indirecta en la propiedad privada mediante el *establecimiento de una serie de ventajas y privilegios de los que disfrutarían aquellos propietarios que voluntariamente se acogieran a sus prescripciones*<sup>2808</sup>. A ello se dispondría que *en el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes incluirán en lo sucesivo la consignación necesaria para atender a estas obligaciones.* Las ventajas fiscales de los particulares a la hora de proteger los monumentos sería recogido en el artículo 5 de la Ley, aunque sin renunciar el Estado al derecho de tanteo: *Los edificios pertenecientes a particulares disfrutarán para los efectos contributivos del concepto de Monumentos Públicos, siempre que los propietarios que los restauren o reconstruyan se obliguen a otorgar al Estado el derecho de tanteo.* Al mismo tiempo que se obligaban a los propietarios a *permitir la visita de los mismos en las condiciones que se fijen de acuerdo y a no hacer obra alguna de reconstrucción o reforma sin la oportuna autorización del Ministerio de Instrucción Pública.* En el artículo 6 se precisaría aún más la exención de los impuestos: *La reconstrucción*

<sup>2807</sup> GARCÍA DE ENTERRIA, E., 1983, p.580.

<sup>2808</sup> BARRERO RODRIGUEZ, 1979, p.580.

*o reparación de Monumentos arquitectónicos artísticos quedará exenta de todo género de impuestos municipales o del Estado.*

**- La cesión de bienes inmuebles de interés histórico y artístico del Estado a las Corporaciones Públicas.**

En la Ley de 1915 se establecería la capacidad de cesión en usufructo por parte del Estado de bienes inmuebles de interés histórico y artístico a aquellas Corporaciones Locales que lo solicitasen como eran los casos de provincias, Municipios, Corporaciones y Asociaciones, por dicho orden de preferencia, en caso de que su conservación no podía ser atendida debidamente, por un tiempo proporcional a los gastos que hayan de realizarse en la restauración o reparación, para los cuales podrán disfrutar de la subvención máxima que autoriza el art.4º (art.8.1). De la misma forma se podría ceder a falta de aquellos organismos a los particulares que lo solicitasen, aunque en este caso debería celebrarse un concurso en que se prescribirían las bases, que versaría sobre el número de años del usufructo, la importancia de las obras de reparación y las garantías del cumplimiento de la obligación (art.8.2). Antes de hacerse la concesión, deberían ser oídas las Academias y Juntas, debiendo sujetarse a la inspección constante del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.8.3).

**6.4. Un ensayo en la configuración de una institucionalización administrativa de tutela de Bienes Inmuebles declarados Monumentos Nacionales.**

**6.4.1. Una reorganización del institucionalismo administrativo: Las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando y la Comisión de Monumentos.**

Con la Ley Moyano de 1857 al ser suprimido la Comisión Central de Monumentos, todas sus funciones serían encomendadas a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pasando a ser éstas órganos consultivos al crearse el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Hasta 1918, habría una cierta hegemonía sobre la de la Historia, en cuanto que se convierte en un órgano de mayor peso, pero en 1918 sería regulado el funcionamiento de las Comisiones de Monumentos lo que supuso que ocurriera a la inversa, la Real Academia de la Historia prevalecería sobre la de Bellas Artes de San Fernando. Los informes redactados por las Reales Academias (...) Existiría una Comisión de estudios para declaraciones de Monumentos, entre los que se encontrarían Elías Tormo, Narciso Sentenach, Alvarez-Ossorio y José Ramón Mélida. Consta el gran número de informes que redactó Mélida a lo largo de este periodo para que fuesen declarados como Monumento Nacional algunos bienes inmuebles entre los que se encontraban. Los Boletines de la Real Academia de la Historia se hicieron verdaderos instrumentos de divulgación patrimonial.

**- El Reglamento de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos de 14 de agosto de 1918.**

El 14 de agosto de 1918 sería promulgado el Reglamento de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos, un nuevo intento de dotar al órgano tradicional del Patrimonio Monumental de una mayor eficacia. En la Exposición de Motivos se señalaba el papel que había tenido las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, especialmente en el ámbito local: *Constituidas por personas docta y por su residencia en cada localidad, son conocedoras a fondo de la riqueza artística e histórica de la comarca que habitan, por lo que nadie como ellas para velar por la conservación de unas fábricas arquitectónicas en la que puede decirse que ha quedado impreso el paso de las generaciones sucedidas en el transcurso del tiempo, como asimismo para investigar la existencia y procurar la adquisición por el Estado de cuantos elementos de mérito intrínseco y de documentación, lápidas, relieves, medallas, cuadros, estatuas, códices, etc., puedan contribuir a enriquecer los Museos y Bibliotecas Nacionales.* Como precisaba la propia Exposición, el Reglamento de 1865 que había regulado en los últimos decenios debía de ser adoptada a las nuevas circunstancias políticas y sociales: *estas Comisiones provinciales de Monumentos se han regidos hasta aquí por una legislación anticuada, como lo es el Reglamento de 24 de noviembre de 1865; la correlación natural del tiempo exige, pues, el reformar las reglas aludidas a fin de que las expresadas Comisiones funcionen al unísono de los organismos con que tienen una estrecha relación. A este fin tiende el nuevo Reglamento de las Comisiones provinciales de Monumentos históricos y artísticos, en el que se concretan y modernizan los preceptos del Reglamento antiguo, conservando su espíritu y finalidad propuesto por la Comisión mixta organizadora de aquellas y rectificado, de común acuerdo, por las Reales Academia de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando; por lo cual, el Ministro que suscribe tiene el honor de elevar a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Reglamento de las Comisiones provinciales de Monumentos históricos y artísticos.*

En el Capítulo I se regulaba la organización y funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Nacionales. Como estableciera el artículo 1º estas Comisiones estarán compuestas por todos los individuos correspondientes de dichas dos Reales Academias que residan en la provincia respectiva. Serían además individuos natos de cada Comisión: El presidente de la Diputación Provincial, el Alcalde de la capital, el Rector de la Universidad, y donde no los hubiera, el Director del Instituto general y técnico, el Prelado de la Diócesis correspondiente a la capital o en la persona que delegue, los Directores de las Academias de Bellas Artes que, con carácter oficial, existan en las capitales de provincia, y dos individuos más de su seno, designados por las mismas, cuyo nombramientos serán confirmados por las respectivas Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, el Arquitecto provincial, el municipal de la localidad y el diocesano correspondiente, los Jefes de los Museos dependientes del Estado o de la provincia (art.2). Cada Comisión elegirá un Presidente, un Vicepresidente, un Conservador y un Secretario. Constituidas las Comisiones provisionalmente bajo la presidencia del Académico más antiguo, y actuando de Secretario el



más moderno, se procederá por sufragio a la elección de cargos entre los correspondientes de ambas Reales Academias, siendo condición precisa la de que el Presidente y el Vicepresidente correspondan a distinta Academia, y lo mismo el Conservador y el Secretario. Estos cargos serán trienales, pudiendo ser reelegidos, dando cuenta a la Comisión Mixta de la formación y de cuantas alteraciones ocurran en dichas comisiones, a fin de que puedan ser comunicadas a las respectivas Academia (art.3). La Presidencia honoraria de estas Comisiones corresponderán a los Gobernadores de las respectivas provincias (art.4°).

En el capítulo II se distinguirían entre atribuciones, deberes y obligaciones que debían desempeñar las Comisiones Provinciales de Monumentos. Entre las atribuciones se encontrarían: El reconocimiento y asidua vigilancia de los Monumentos Históricos y artísticos de todo género en su provincia, la intervención en las excavaciones arqueológicas que se efectúen en la provincia, promovidas por los particulares, ateniéndose a lo preceptuado en la Ley de Excavaciones y su Reglamento de 7 de junio de 1911, o lo vigente. la creación y organización de nuevos Museos Arqueológicos y de Bellas Artes, y el fomento de las existentes, aún no incorporados al Estado; la propuesta al Estado, por conducto de las Academias respectivas, la adquisición de cuadros, estatuas, lápidas, relieves, medallas, códices, manuscritos de todas clases y cualesquiera otros objetos, que por su mérito o importancia artística o histórica merezcan figurar en los Museos, Bibliotecas o Archivos; La custodia y decorosa conservación de los sepulcros y enterramientos de nuestro Reyes, príncipes y hombres ilustres, y la traslación de los que por haber sido enajenados los edificios donde existían o por su mal estado lo exigiesen y asesorar y recurrir a los Gobernadores, Alcaldes y demás autoridades en cuanto se relacione con los fines propios de las mismas Comisiones provinciales de Monumentos y de la representación que ostente. Serían establecidas como deberes la evacuación de los informes que el Gobierno o las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando les pidieren sobre el mérito e importancia de los Monumentos artísticos que deban conservarse o restaurarse en la provincia respectiva (art.11.1), Hacer propuestas e informar ambas Academias acerca de las exploraciones arqueológicas que deban efectuarse en los despoblados de antiguas ciudades u otros lugares análogos, y la conveniencia de no malograrlo así lo aconsejaren, ateniendo a lo dispuesto en la vigente Ley de Excavaciones (art.11.2).

Sería instituido un nuevo organismo, en aquellas poblaciones cuya importancia monumental o artística lo requiera, las llamadas Subcomisiones locales de Monumentos, que serían propuestas por la Comisión Mixta a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando la creación de Subcomisiones locales de Monumentos, cuya organización y funcionamiento serán análogos a los de las comisiones provinciales (art.12). Se

potenciaría a su vez el papel que hasta este momento había tenido las instituciones locales de carácter político y administrativo en la tutela pública de los Monumentos Nacionales. Al igual que habría ocurrido con el Reglamento de 1865 las Comisiones Provinciales de Monumentos comunicarán directamente con los Gobernadores, dando cuenta de ello a las dos Reales Academias en los casos siguientes, como así se preceptuaría en el artículo 13, aunque en aquellos inmuebles de interés histórico y artístico de dominio privado quedaba aparentemente fuera de esta disposición: 1º) *Para reclamar contra toda obra que se realicen en los edificios públicos de carácter histórico o artístico, cuando no estén completamente autorizada y aprobada. Las Comisiones requerirán de las Autoridades la suspensión de semejantes obras hasta que recaiga sobre el asunto acuerdo definitivo;* 2º) *Para representar contra la inmediata enajenación, demolición o destrucción de los monumentos de verdadero mérito o interés nacional, cualquiera que sea el pretexto que se alegare para intentar su ruina;* 3º) *Para proponer la pronta reparación de aquellas construcciones de mérito artístico, que siendo propiedad de la provincia o del municipio, no ofrecieran seguridad de duración.* 4º) *Para procurar que los objetos de arte cuya posesión importe a la historia de la civilización española, no sean enajenados con destino al extranjero.* 5º) *Y, por último, para proponer cuanto juzgaren conveniente a los fines de su instituto y estuviere en sus atribuciones.* De la misma manera *los Gobernadores de Provincia y los Alcaldes de los pueblos prestarán a las Comisiones Provinciales de monumentos el más eficaz apoyo, proporcionándoles cuantos medios requieran para el cumplimiento de su cometido, procurando remover los obstáculos que puedan oponerse al ejercicio de sus atribuciones* (art.14). Se especificaría como obligación de los alcaldes de los pueblos para con las Comisiones Provinciales de Monumentos una serie de obligaciones, entre los que se encontraba la vigilancia de la conservación de los edificios que hubieran sido declarados Monumentos históricos o artísticos, dando parte a la Comisión Provincial de cualquier deterioro que en ellos advirtiesen, para su pronta reparación por quien correspondiere (art.15.2). Por su parte, Las Diputaciones Provinciales seguirían *incluyendo en sus presupuestos las partidas necesarias para atender a los gastos ordinarios de las Comisiones de Monumentos, satisfacer las dietas que exigieran precisas expediciones, y las sumas que se conceptuaren anualmente indispensable para llevar a cabo las reparaciones y restauraciones que hayan de hacerse en los edificios monumentales que fueran de la pertenencia de la provincia* (art.17.1). De la misma manera lo harían los ayuntamientos respecto de lo que, teniendo igual carácter, les hubieran sido confiados para fines de utilidad pública (art.17.2). Sin embargo, la falta de presupuesto fue una constante que tuvieron que enfrentarse las Comisiones Provinciales de Monumentos, especialmente por la falta de coordinación con las Corporaciones locales, tanto diputaciones como ayuntamientos. De esta manera, la Comisión Provincial de Monumentos de Córdoba pediría en su sesión del 29 de abril de 1921 que las Diputaciones en general, y en el presente caso la de Córdoba, consignasen cada una en sus respectivos presupuestos, según están mandado, la cantidad mínima de 500 pesetas anuales para atender

a los gastos de las mismas, por lo que se promulgaría **la Real orden de 14 de julio de 1921** comunicando a los Gobernadores Civiles que por las Diputaciones Provinciales se consigne desde el próximo presupuesto, como mínimo, la cantidad de 500 pesetas anuales para que la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos pueda atender a los gastos de la misma

A pesar de la promulgación del nuevo Reglamento, las Comisiones siguieron siendo criticadas desde múltiples ámbitos, especialmente por los arquitectos, como fue el caso de Torres Balbás que ya ponía en entredicho el funcionamiento de estas instituciones: *Ya sabemos de que se trata cuando se habla de las comisiones de monumentos. Son unas comisiones formadas por personas que ocupan tal o cual cargo, a veces sin afición alguna a su objeto determinado, y dotadas con cantidades exorbitantes que alcanzan a 100 pesetas, a 200 pesetas, a 500 pesetas si se trata de una de las grandes capitales de España*<sup>2809</sup>. Una cruda radiografía aportaría Jeroni Martorell sobre las Comisiones Provinciales de Monumentos: *Poco esperamos de su eficacia. Se constituyen dichas juntas a base de excesivo número de personalidades, atareadas ya en sus cargos, falta en cambio personal competente, retribuido, dedicado constantemente al trabajo. Se trata generalmente de comisiones de simples aficionados, sin preparación concreta para la compleja misión que tienen encomendada; los prejuicios públicos llegan a estas juntas amparados por la honorabilidad de sus miembros; sus resoluciones son muchas veces incoherentes*<sup>2810</sup>.

**- La potestad de las Comisiones de Monumentos sobre el Ministerio de Hacienda en las subastas de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico.**

Una de las peticiones solicitada por las Comisiones de Monumentos y la Real Academia de Bellas Artes fue el papel institucional que debía cumplir referente al ámbito de la subasta de bienes inmuebles de interés histórico y artístico. En la Petición de 17 de diciembre de 1919 hecha por la Comisión de Monumentos de Navarra solicitando que no se lleve a efecto subasta alguna de fincas de índole histórica o artística sin oír antes a las Comisiones de Monumentos, aparece reflejado las circunstancias en que se encontraba, en este caso por parte de la de Navarra: *La Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de Navarra ha acudido en 4 de octubre de 1919 a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en demanda de que sea por éstas atendida a la idea de que en lo sucesivo no pueda intentarse subasta alguna por el Estado, tratando de fincas de índole artística o histórica, sin antes pedirse informe a las Comisiones de Monumentos por conducto de esta Real Academia, la cual, aquilatando aquellos informes, pronunciará su fallo definitivo.* Se advertía que el hecho de subastar obras de arte sin el previo permiso de las Comisiones de Monumentos y la mera autorización del Ministerio de Hacienda podría llevar a una pérdida

---

<sup>2809</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo “Legislación vigente en España sobre las antigüedades monumentales y artísticas” en *Revista Archivo de Arte Valenciano*, 1919, pp.103-104.

<sup>2810</sup> MARTORELL, J., 1919, p.155.

considerable del Patrimonio, como había ocurrido en el caso de la subastas de las ruinas del convento de Santo Domingo, en Estella, ocurrida en 1918, a pesar de que como notificaba en el propio Informe *por fortuna no han producido la desaparición de esos importantes restos artísticos e históricos, por haber casado caudal y providencialmente a buenas manos; pero que hace temer que, por el camino emprendido, pueda la Hacienda española venir a auxiliar a los mercaderes y traficantes que se llevan a extranjeras tierras nuestro patrimonio artístico.* En otro caso como fue la subasta emprendida con la iglesia del Crucifijo de Puente la Reina, como así haría constar la Comisión de Monumentos de Navarra, *el Arquitecto tasador había llamado la atención de la Superioridad en el propio documento de tasación acerca de la injuria que representaba para el Arte el intento de subasta, no obstante lo cual, la Hacienda pública la realizó, a pesar de las órdenes, reglamentos y leyes que prohíben la enajenación de nuestra riqueza artística y monumental.* Ante estos antecedentes, la Comisión de Monumentos de Navarra denunciaría *quela Hacienda pública no es organismo que por su actuación tenga medios de conocer cuáles sean los monumentos ni los objetos de arte que habiéndosele entregado para su enajenación debieran, sin embargo, ser conservadas por el Estado por su interés artístico o histórico. Carece la Hacienda de órganos apropiados para llegar a ese conocimiento, por lo que no bastaba que un Señor arquitecto, perito en esas materias por los estudios propios de su carrera, haya hecho a la Hacienda pública sus atinadas observaciones, porque tampoco puede este Centro administrativo detener una subasta por sí y ante sí, sino que para ello sería necesario que el Centro que lo entregó el edificio para ser subastado le ordenase aquella determinación, de lo que se deducía que únicamente tal orden no puede partir sino del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que es el encargado de la conservación de nuestro caudal monumental, y para que este Ministerio actúe precisa que de antemano el edificio de que se trate sea incluido entre los Monumentos nacionales o edificios artísticos, sin que, por otro lado, pueda pretenderse que esa declaración debe ser aplicada a todos los que muestren alguna condición artística, sino solamente a aquellos cuyo capital importancia en la Historia o en el Arte les hagan acreedores a ello, pues de otro modo serían tantos los declarados Nacionales y Artísticos que harían imposible al Estado el ejercer sobre ellos la vigilancia y la conservación, advertencia que se había ya repetido en un gran número de instancias en este momento para no desvirtuar el verdadero espíritu conservador que conllevaba dicha declaración y que tenía que corresponderse con la realidad presupuestaria que en este momento se tenía. De esta manera sería defendida que para que la acción sea debidamente ejercida, es absolutamente necesario que la petición de conservación por declaración de Monumento Nacional y Artístico sea demandada con antelación a los anuncios de subasta, y para ello las Comisiones de Monumentos pudieran dirigir desde luego sus demandas, que la Real Academia examinaría, y aquilatando la conveniencia de hacerlo, concedería su apoyo a las propuestas en cuanto las estimara justas para conseguir el resultado apetecido, pues no es menos entusiasta esta Real Academia ni menos avara del Tesoro artístico español que pueda serlo Comisión alguna de Monumentos. La Real Academia de la Historia pediría que para que no se repitan los casos de que V.S. da cuenta, sería conveniente que esa Comisión provincial*

*enviase una relación de los edificios de Navarra que, a juicio suyo, debieran ser conservados por el Estado como Monumentos Nacionales, y los de aquellos otros a los que debe alcanzar su vigilancia por sus Monumentos Artísticos*<sup>2811</sup>.

#### 6.4.2. Los conservadores de monumentos nacionales.

A raíz de la promulgación de la **Real orden de 1º de enero de 1919** se regularía el cuerpo del personal afecto a la conservación y vigilancia de los monumentos nacionales, para lo que se intentaría dotarle de una identidad administrativa, al darle un carácter permanente dentro del organismo tutelar del Patrimonio Monumental y serán los que consientan el crédito consignado al efecto en los Presupuestos del Estado (art.1º). No podrían nombrarse en cada capital de provincia en que existan monumentos más que un solo conservador de todos los nacionales de la misma y de los inmediatos a ellas (art.2). En los casos que los monumentos nacionales radicasen fuera de la capital de la provincia se podría nombrar un conservador (art.3.1), por lo que este con este fin, y una vez publicada en la Gaceta de Madrid la presente Real Orden, las Comisiones provinciales de Monumentos y la Central comunicarían a la Dirección general los que se encuentren en tales condiciones (art.3.2), pudiendo a su vez disfrutar de la remuneración que la Superioridad determine, según las circunstancias que concurren en el servicio, pero dentro de la escala de haberes que se fija por esta Real Orden (art.3.3). En principio, los conservadores de monumentos nacionales serían nombrados por Real Orden, o por Orden de la Dirección General de Instrucción Pública, según su haber (art.5). Se determinaría en la partida presupuestaria el número de conservadores de monumentos nacionales que sea preciso para completar la plantilla provisional, y *en vista del resultado de la reforma se procurará que todos aquellos tengan la vigilancia directa de un funcionario* (art.6). Las tomas de posesión y la autorización de nóminas se efectuarán por los Presidentes de las Comisiones Provinciales de Monumentos o por el de la Central, según corresponda (art.7). Una de las obligaciones primordiales para desempeñar el cargo de conservador de monumento nacional sería la de residir en la localidad en que se hallasen situados, circunstancia que debían de certificar mensualmente los Presidentes de las Comisiones respectivas de Monumentos, a las que se unirían la nómina, sin cuyo requisito no podrían acreditar los haberes devengados (art.8). Al existir ya un conservador en el seno de las Comisiones de Monumentos, desempeñado por un vocal de la misma, se preceptuaría por el artículo 9º que tendrían éstos *el carácter de conservadores inspectores, considerándose como auxiliares a los conservadores nombrados con arreglo a esta Orden*. El nombramiento definitivo sería realizado por concurso, una vez consignado en los presupuestos el crédito necesario para este servicio, de conformidad con la regla 6º de la presente Real Orden, oído anteriormente a la

---

<sup>2811</sup> Boletín de la Real Academia de San Fernando, Año XIII, Núm.52, Madrid, 31 de diciembre de 1919, pp.232-234.



Comisión correspondiente, teniendo como circunstancia preferente la de haber desempeñado estos cargos, sin nota desfavorable (art.10).

En el Oficio de traslado de la Comisión de Oviedo de 5 de febrero de 1919 sería puesto en entredicho la funcionalidad de los conservadores de Monumentos: *En opinión general que tales Conservadores no son ni necesarios ni útiles tal como en lo general fueron designados y funcionaron hasta ahora, porque en todo monumento declarado nacional que tiene adscrito un arquitecto, éste no precisa ni es compatible con él semejante funcionario; y cuando el monumento designado tal facultativo reconstructor, resulta en la mayoría de los casos que tales Conservadores de nombramiento especial no son técnicos, carecen de los conocimientos históricos y artísticos del caso y desconocen los que pueden ser necesario para la conservación del monumento histórico o artístico; cosa que no sucede dentro del personal de las Comisiones donde siempre fue uno de los Vocales del Arquitecto provincial, como ahora sigue, los diocesano y el del municipio del capital. Además, tal servicio de conservación y vigilancia no es ajeno asimismo a la función gubernamental por medios de sus facultativos arquitectos en la Junta General de Construcciones Civiles, organizada por los Reales decretos de 16 de junio de 1905 y 4 de septiembre de 1908, donde se da principal importancia a las construcciones monumentales, sin olvidar la intervención superior y natural de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, que en provincias están representadas por las Comisiones provinciales de Monumentos.*

Con la **Real orden de 3 de febrero de 1920** se dispondría que en las poblaciones en que hubiera un gran número de Monumentos Nacionales, se pudieran nombrar un segundo Conservador gratuito. La causa justificada aparece insertada en la Exposición de Motivos, al demostrarse que en poblaciones en que se hallan enclavados bastantes Monumentos nacionales, como en el caso de Avila, Granada y Toledo, se cumpla con la atención debida la obligación de vigilancia aneja a los cargos de que se trata, por lo que en las poblaciones en que sea copioso el número de Monumentos nacionales, podrá nombrarse un segundo conservador gratuito, con sujeción en la regla cuarta de la Real orden organizadora de que se ha hecho mérito (art.1º). El Presidente de la Comisión provincial de Monumentos respectiva podría designar los monumentos de que cada Conservador de la capital y de los inmediatos a ella debe encargarse (art.2). Las Comisiones Provinciales de Monumentos irían adquiriendo un papel predominante en la selección de los conservadores con la promulgación de la **Real orden de 31 de julio de 1920**, disponiendo que se manifestándose a la Dirección General de Bellas Artes por los Presidentes de las Comisiones Provinciales de Monumentos, para los que exijan nombramientos de conservador. Para ello se dispondría que dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de la Real orden se manifestaría a la Dirección general de Bellas Artes, por los Presidentes de las Comisiones Provinciales de Monumentos, los que exijan nombramiento de Conservador, lo tengan o no actualmente con sujeción a las reglas 2º y 3º de la Real orden de 5 de febrero antes citada, por lo que se propondría a la vez a la

Dirección persona idónea y de garantía que se encargue de su custodia (art.1º). Se puntualizaba que las Comisiones de Monumentos debían de elegir primordialmente en la selección de conservadores para aquellas localidades que estuviesen aisladas o fuera de población, mientras que no habría prioridad si el inmueble se tratase de un templo o que por cualquier otra circunstancia especial estuviera debidamente vigilado (art.2º). Las obligaciones del conservador estaría preceptuado en el artículo 6º, perfilándose que sería *puramente de vigilancia y custodia, y, por tanto, de carácter subalterno*, por lo que dependerían directamente de los Conservadores técnicos, Vocales de las Comisiones Provinciales de Monumentos, por lo que serían considerados auxiliares (art.6º).

Sin embargo, la falta de presupuestos llevaría a promulgarse la **Real orden de 4 de marzo de 1921**, por lo que se reorganizaba nuevamente el perfil administrador de los Conservadores de Monumentos, como así aparece reflejado en su propia Exposición de Motivos: *En estudio, al presente, la organización de los Conservadores de Monumentos Nacionales para que presten del modo más eficaz un servicio tan importante, y mientras se llega a la adopción del sistema más conveniente, es preciso, no sólo adoptar el personal actual a las cifras del presupuesto vigente de este Ministerio, sino intensificar sus funciones, para que la custodia abarque mayor radio de acción*. Ante estas circunstancias se establecía que no podría haber en cada capital de provincia en que existan Monumentos nacionales más que un solo Conservador retribuido de todos los de la misma y de sus inmediaciones (1º); Podría nombrarse un Conservador para los Monumentos Nacionales que radique fuera de la capital de la provincia, sin estar en sus inmediaciones y retribuido (2º); Las plazas de Conservador serían las que el presupuesto consigna en su capítulo 13, art.3º, concepto Monumentos artísticos e históricos, con los sueldos en él establecidos (3º); La toma de posesión y autorización de nóminas seguirían efectuándose por los Presidentes de las Comisiones provinciales de Monumentos o por la Comisión Mixta organizadora de ellas, según corresponda (4º), sería obligatoria la residencia en la localidad en que estuviera situado los bienes inmuebles a los que se debían tutelar, no pudiendo percibir sus sueldos sin certificado, que se uniría a la nómina autorizada por el Presidente de la Comisión provincial respectiva (5º); Los Conservadores de Monumentos nacionales seguirían siendo auxiliares de los Conservadores respectivos de las Comisiones, que tendrán el carácter de Conservadores Inspectores, pudiendo adoptarse por la Dirección General de Bellas Artes a la asignación presupuestaria y según aconsejara las necesidades del servicio el propio personal que hasta este momento contaba (7º), proveyéndose las vacantes por Real orden o por la Dirección de su digno cargo, según su haber (8º), quedándose autorizado segundos Conservadores, hasta nuevo acuerdo (9º).

#### **6.4.3. La reforma del Servicio de Construcciones Civiles, encargado de la restauración y conservación de los Monumentos Nacionales, a raíz del**

**Real decreto de 16 de junio de 1905: La creación de los Inspectores Generales de obras artísticas.**

El Servicio de Construcciones Civiles sería reformado por el **Real decreto de 16 de junio de 1905**, teniendo como causa como así queda definido en la Exposición de Motivos por su importancia excepcional, *que requería necesidades de conservación de los monumentos declarados nacionales por razones de historia y de arte, centro de atracción y de estudio para toda persona ilustrada algunos de ellos por la gentileza de su artística labra singular en la historia universal del arte y la civilización*, para lo que debía de ser organizado el propio Servicio, *por esa misma diversidad en el propósito y en el objetivo*, que aconsejaba una diversificación consiguiente entre los técnicos, los Arquitectos, *que deben tener a su cargo las edificaciones modernas, del ramo de instrucción pública en especial, y aquellos otros que deben tener como singular misión y encargo la dirección facultativa de los trabajos de conservación y consolidación de los preciados monumentos testimonio de la gloriosa historia de la Patria, evitándoles aquellos aditamentos, so capa de conservación y por prurito inmoderado de restauración, que desfiguren con frecuencia el carácter propio de la obra artística, a la que restan la venerada pátina de los siglos, testimonio de su autenticidad y el mayor encanto para los devotos admiradores*. El cuidado de los Monumentos pasaban especialmente por evitar *profanaciones que debían de librarse los monumentos*, por lo que debía de ser encomendado *exclusivamente al cuidado de los Arquitectos arqueólogos, en número fijo y reducido, que con especiales condiciones y garantías habrán de ser siempre elegidos y designados*, por lo que se ría declarado *la necesidad de concurso libre para premiar el mejor proyecto con la dirección facultativa de las obras en las de nueva planta; pero se hace indispensable, además, la determinación de la reposiciones civiles del Ministerio, bajo la alta inspección de la Real Academia de San Fernando y la dirección de la Comisaría general de Bellas Artes y Monumentos*. El personal especial asignado al servicio de Construcciones Civiles se compondría de una junta facultativa, que se denominará de Construcciones Civiles, establecida en el Ministerio (art.3.1), de los Arquitectos directores de obras nuevas y de reparación de ellas, en el número suficiente para las que hayan de ejecutarse (art.3.2), de un número fijo de Arquitectos arqueólogos, encargados de la dirección y conservación de los monumentos artísticos e históricos (art.3.3) y de Juntas especiales e inspectoras de las obras en donde éstas radiquen (art.3.4). La Junta facultativa de Construcciones Civiles la constituirán seis Vocales Arquitectos, entre los cuales elegirá un Vocal que la habrá de presidir en ausencia del Ministro y del Comisario general (art.41.), siendo los restos restantes inspectores generales de obras nuevas y reparación de edificios, nombrados de Real orden (art.4.2), siendo designado de la misma forma se designará el sexto Vocal, que tendrá las atribuciones especiales de Secretario (art.4.3). Asimismo, la Junta, atendiendo a las condiciones especiales de sus miembros, propondría los dos o tres que

hubieran de desempeñar además las funciones de Inspectores especiales de monumentos, distribuyendo entre ellos la inspección según el estilo arquitectónico con entera independencia de la situación geográfica. La inspección general de obras estaría distribuida en zonas geográficas, encomendadas a cada uno de los cinco inspectores generales. La división geográfica y distribución de las provincias en zonas, la reforma de la misma y la designación de los Inspectores se determinará de Real orden, oída siempre la Junta facultativa.

En la Exposición de Motivos del **Real decreto de 4 de septiembre de 1908** se fundamentaría la supresión de la Comisaría general de Bellas Artes y Monumentos y *la necesidad de modificar, por enseñanza de la práctica, algunos extremos del mencionado Real decreto en su relación con el funcionamiento y atribuciones de la Junta facultativa del ramo, con el sistema de ejecución más conveniente para las obras que este servicio abarca, con la división de la Península e islas adyacentes en zonas para la inspección de las obras mismas, con las facultades que el Gobierno se debe reservar en los concursos de proyectos para la construcción de edificios de nueva planta cuando dichos concursos sean declarados desiertos, con la necesaria acumulación de presupuestos correspondientes a proyectos adicionales*, sería reformado el servicio de las obras denominadas Construcciones Civiles, siendo Ministro de Instrucción Pública, Faustino Rodríguez San Pedro. Entre las atribuciones que le corresponderían a este Servicio estaban: La conservación, reparación o indispensable restauración de los Monumentos arquitectónicos, cuyo cuidado corresponde a dicho Ministerio (art.1.1); La conservación, reparación y reforma de los demás edificios dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.1.2); La construcción, de nueva planta, de edificios que se costeen, total o parcialmente, con fondos facilitados por el mismo Ministerio (art.1.3) y la inspección de los que se construyeran bajo la dirección de otras personas o Arquitectos no designados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siempre que en cualquier forma fuera subvencionado (art.4). El Servicio pasaría a depender de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a la que correspondía su dirección, bajo la superior autoridad del Ministro (art.2); estando encomendada La parte facultativa del servicio de Construcciones Civiles a los Arquitectos y sus Auxiliares nombrados con este objeto (art.3).

Sería regulada minuciosamente la institución administrativa, siendo el órgano directivo la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, que lo constituirían siete Vocales; uno de éstos será Presidente y otro Secretario. En casos especiales, cuando el Ministerio de Instrucción Pública lo considerara necesario, podrían asistir también a la Junta de Construcciones Civiles, como Vocales para el examen de determinados asuntos, individuos del Real Consejo de Instrucción Pública, del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos de la Junta Central de primera enseñanza o de la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando, cuya designación se hará en cada caso, dando preferencia a los que tengan carácter de Letrados, siempre que la cuestión o cuestiones, que hayan de tratarse con su asistencia tengan carácter administrativo o de derecho (Art.5º). La Junta facultativa y los Vocales que la constituyen desempeñarán las funciones consultivas e inspectoras que se consignan en el presente decreto. Los siete Vocales son en tal concepto, Inspectores natos del servicio facultativo de Construcciones Civiles (art.6). Los Vocales de la Junta facultativa de Construcciones Civiles serán nombrados por Real orden. En igual forma se hará la designación de los que han de desempeñar los cargos de Presidente y Secretario, así como de la zona que cada uno ha de inspeccionar, en armonía con lo prevenido en el núm.6º del artículo precedente (art.11). Para ser Vocal permanente de la Junta facultativa de Construcciones Civiles se requiere ser Arquitecto español y tener alguna de las condiciones siguientes: 1º) Ser Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; 2º) Ser Catedrático numerario de la Escuela Superior de Arquitectura, con quince años de antigüedad como tal Profesor numerario y 3º) Haber sido pensionado, en virtud de oposición, en la Academia Española de Bellas Artes, en Roma, habiendo cumplido el tiempo y las obligaciones reglamentarias de la pensión, teniendo además veinte años de ejercicio profesional (Art.12). Serán designados el número de los Arquitectos Directores de obras en función a los que por necesidad fueran necesarios para la conservación, reparación o indispensable restauración de los Monumentos artísticos e históricos a cargo del Ministerio, y para la conservación, reparación, reforma y construcción de nueva planta de los edificios dependientes del mismo (art.16). Los Arquitectos Directores de obras de Conservación, reparación y restauración de Monumentos artísticos e históricos serán nombrados de Real orden, previa propuesta en terna de la Junta facultativa de Construcciones Civiles, que tendrán en cuenta para ello, como para todas las demás del servicio, las circunstancias especiales de los Arquitectos propuestos en relación con la naturaleza y condiciones de obras (art.17). Al mismo tiempo en los proyectos de restauración de Monumentos históricos y artísticos se tendrán muy en cuenta las atribuciones que las disposiciones vigentes conceden a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, cuyos Estatutos, en la parte que con ellos se relaciona, se considerarán parte integrante y complementaria de este decreto (art.26). Para cada obra será nombrada una Junta especial administrativa, compuesta, según su importancia o condiciones, de tres o cinco Vocales. Estos cargos serían honoríficos y gratuitos. Se podrán exceptuar aquellas obras cuya duración sea menor de tres meses, o cuyos presupuestos no exceda de 5.000 pesetas (art.32). En las Juntas especiales de las obras que se ejecutasen en Monumentos artísticos e históricos, dos de los Vocales habrán de ser individuos de la Comisión provincial de Monumentos y corresponsales, uno de la Real Academia de la Historia y otro de la de San Fernando (art.33). Las Juntas especiales empezarán a funcionar desde el momento en que principie la



ejecución de la obra (art.34). La aprobación de proyectos de obras de Construcciones Civiles se hará por Real decreto, acordando en Consejo de Ministros, cuando el presupuesto importe 10000 ó más pesetas; por Real orden, cuando el importe del presupuesto se halle comprendido entre 5.000 y 100.000, y por la Subsecretaría, cuando el importe sea menor de 5.000 pesetas (art.27). Una vez promulgada la Ley de Presupuestos correspondiente a cada ejercicio, procedería la Subsecretaría a formular, con la oportuna reparación de obras nuevas en edificio de nueva planta, en ampliación y reforma de los existentes y en conservación de los Monumentos, el oportuno plan de las obras afectas al servicio de Construcciones Civiles, distribuyendo los créditos según los términos de la ley, el estado de ellas, las necesidades más urgentes y los compromisos legalmente adquiridos en las subastas, pudiéndose reservarse el Ministerio la cantidad que estimase prudencialmente para atenciones imprevistas durante el ejercicio. Oída la Junta facultativa, se aprobará el plan anual de Real orden, y se publicará en la Gaceta de Madrid (art.30). Para ser nombrado Arquitecto Director de la conservación, reparación o restauración de Monumentos artísticos o históricos, sería condición preferente Ser Académico de número de las Reales de la Historia o de San Fernando; Pensionado en Roma en virtud de oposición; Profesor numerario o Auxiliar por oposición de las Escuelas de Arquitectura de Madrid o Barcelona; Haber hecho oposición a Cátedra de Historia o teoría de las Bellas Artes, habiendo aprobado los ejercicios y tener adquirida buena y justa fama en este género de trabajos por los estudios sobre Historia de la Arquitectura que haya publicado, restauración de Monumentos que con general aprobación haya realizado y proyectos de restauración que hayan sido premiados en Exposiciones nacionales (Disposición Transitoria Segunda).

Una novedad importante aparecía reflejada en la Disposición Transitoria al otorgar a la Junta facultativa de Construcciones Civiles la facultad de clasificar los Monumentos declarados Nacionales y colocados bajo la inspección del Ministerio de Instrucción Pública, dividiéndolos en dos Secciones: en la primera se comprenderán los que continúan utilizándose, como templos abiertos al culto, edificios destinados a la enseñanza, etc., y en la segunda, los que no tengan aplicación a ningún servicio activo, precisando que *en estos últimos no se autorizarán más obras que las de conservación o de sostenimiento, y en los primeros se ejecutarán las de conservación, reparación, restauración o mejoras que sean precisas y puedan realizarse sin menoscabo de su interés artístico e histórico; habiendo de costearse las unas y las otras por las entidades y conforme a las reglas que estén establecidas para ello*. Para establecer esta distinción se pediría informe a las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, cuando así lo juzgue oportuno la Superioridad. Unos meses más tarde en el **Real decreto de 3 de marzo de 1922**, se volvería a retomar la clasificación de los Monumentos Nacionales, estando comprendidos en tres grupos, incluyendo en el tercero a los Monumentos

Nacionales, para lo que se formaría y publicaría por el Ministerio de Instrucción Pública un inventario, uniendo en cada caso los informes técnicos que han servido de base a su asignación. Los Monumentos serían clasificados, previo su examen técnico en tres grupos: 1º) Catedrales; 2º) Monumentos que pueden ser utilizados con fines docentes y 3º) Monumentos que no pueden ser utilizados con fines docentes. En la ejecución de las obras se distinguiría entre las que se realizarían para los dos primeros grupos, en donde podrían realizarse las obras de conservación y reparación necesarias para su sostenimiento y útil aplicación y en el último, solo las de consolidación, *indispensable para conservar la parte que haya sido declarado monumento nacional, o para mantenerlos en el estado de conservación que tengan al presente* (art.1). Al término de cada ejercicio, el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes redactaría una Memoria de las obras terminadas en el anterior y de las que se encuentren en curso de ejecución, cantidades invertidas en unas y otras, e informes técnicos de los Arquitectos Inspectores de los servicios. Esta Memoria será remitida a las Cámaras para su examen y censura de las Comisiones permanentes de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.2).

Torres Balbas en el Congreso de Arquitectos de 1919 dejaba en cuestión la labor de conservación de este Servicio ante su propio Presidente, Lamparez: *Se pertenece a esta Junta por méritos, servicios y años de trabajo que con frecuencia no tienen nada que ver con la Arqueología Monumental, pues en la profesión de arquitecto es una pequeña minoría la especializada en estas cuestiones. No es, pues, la Junta de Conservación de Construcciones Civiles oficialmente, un organismo verdaderamente técnico en la conservación de monumentos, aunque siempre suele formar parte de ella algún arquitecto que se haya distinguido en su estudio (...)*<sup>2812</sup>. Criticaría asimismo con el propio procedimiento de elección de los arquitectos e incluso la propia preparación científica en el ámbito de la restauración monumental: *El sistema de la terna para las propuestas al ministro, es una de las notas más denigrante de nuestra administración pública, con la que hay que terminar. Tales propuestas y nombramientos, recaen casi siempre en arquitectos meritísimos, absorbidos por completo por otros aspectos profesionales muy diversos y que lo más probablemente no realizarán más que una sola restauración en su vida. Y naturalmente, por extraordinarios que sean sus talentos y su ciencia, colocados de pronto ante una cuestión técnica que ignoran en absoluto y que es imposible de improvisar, estropearán seguramente el monumento que les fue confiado. Además, en realidad cada arquitecto sigue un criterio personal en los trabajos de restauración, pues el Estado carece en absoluto de él*<sup>2813</sup>.

### **6.5. Un caso excepcional de tutela pública del Patrimonio Monumental: La gestión institucional de la Alhambra.**

La Alhambra había sido ocupada por inquilinos privados desde épocas remotas, como fue el caso del viajero inglés Richard Ford. Francisco de Paula

<sup>2812</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo, 1919, p.28.

<sup>2813</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo, 1919, p.29.

y Villadar recoge en su Guía como *a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX se inició la desdichada idea de permitir a todo el que quería, que habitara las torres de la Alhambra. Excepto algunas estancias principales e incapaces para la vida, tal como están hoy, todo lo demás se pobló de familias pobres, que alquilaban a extranjeros parte de sus viviendas. Entonces los azulejos se vendieron como cargas de escombros; los pavimentos perecieron casi todos y un ciego espíritu de destrucción, alimentado por extranjeros que hacían su negocio con frío egoísmo*. Desde los años de la Restauración, la Alhambra se había convertido en uno de los Monumentos Históricos Nacionales digno del interés de la Administración Estatal, aunque en la práctica se dio muy pocos resultados. De la sugestión romántica de los viajeros europeos que suscitaron ese amor por el orientalismo<sup>2814</sup> se pasaría a un empeño más racionalista en la administración y conservación de un inmueble de valor histórico y artístico. Como apunta Victoria Eugenia Chamorro, la protección de la Alhambra y Generalife, *pone de manifiesto cómo la línea virtual de delimitación jurídica, que se apoya sobre referencias físicas permanentes, va sufriendo una continua variación en función de la ampliación del concepto de monumento que se va produciendo a lo largo del siglo XX, vinculado a la evolución de los presupuestos tutelares que se van sucediendo durante este período a nivel nacional e internacional*<sup>2815</sup>. Se considera por la historiografía como el primer ejemplo en el ámbito español de conservación integradora del monumento con su entorno, realizándose no solamente sus valores históricos o artísticos, sino también los valores paisajísticos formando una identidad uniforme. Desde los años finales del siglo, momento en que será protegido el inmueble y su entorno, en palabras de Victoria Eugenia Chamorro se *parte de una noción de monumento histórico aislado de su entorno, condicionando la tutela del bien al ámbito de las construcciones de valor histórico-artístico de la Alhambra y de sus jardines, y como éste se va ampliando mínimamente entre 1905 y 1915 a otros espacios (jardines y parques) y otros elementos arquitectónicos (torres y murallas) comprendidos en el recinto amurallado, para algunos años más tarde, en 1921, extender dicha protección a la huerta de Fuentepaña, las Torres Bermejas y el Carmen de los Catalanés*<sup>2816</sup>.

---

<sup>2814</sup> Sobre la visión romántica de la Alhambra, GALERA ANDREU, P. *La imagen romántica de la Alhambra* Madrid, 1992.

<sup>2815</sup> CHAMORRO, Victoria E., *La Alhambra, el lugar y el visitante*, Córdoba, Almuzara, 2006, p.90.

<sup>2816</sup> Ya en la etapa contemporánea en 1943 por primera vez se habla de una territorialización del concepto de monumento, al ampliarse el ámbito de su protección a todas las edificaciones, bosques, jardines, cultivos y terrenos que forman una unidad de propiedad con la Alhambra. En 1961, se ampliaría el ámbito al incluirse bajo una misma unidad de protección a los espacios considerados testimoniales de la presencia nazarí del territorio formando parte de la unidad paisajística de la Alhambra. Con el Real Decreto de 1979, se uniría el patrimonio cultural y el natural, declarándose Zona de protección del Monumento. Es a partir de 1985 y en 1989 con la publicación del Plan Especial de Protección de la Alhambra y Aljibes, cuando se establecería un ámbito de protección del recinto monumental que excedería de la Alhambra y el Generalife, incluyéndose todos aquellos espacios del entorno natural y urbano que requieren ser tutelados de forma integrada con los elementos arquitectónicos y vegetales que ya conformaban el

Una mirada a la configuración constitucional de la protección de la Alhambra nos ayudara a comprender como el Estado fue ensayando un marco administrativo centrado en un Monumento Histórico, que posteriormente fue proyectando a otros inmuebles históricos nacionales<sup>2817</sup>. En 1870 sería declarado la Alhambra Monumento Histórico Artístico Nacional, confirmado por la Real Orden de 21 de julio de 1872 y ampliada por la Real Orden de 1896, sería una oportunidad perdida para la gestión del inmueble<sup>2818</sup>. De ahí que surgiera un gran número de críticas sobre la conservación del monumento desde fines del siglo. En este sentido, cabe mencionar la descripción que nos proporciona el historiador Manuel Gómez Moreno en su Guía de Granada, publicada en 1892: *Desde entonces (la invasión napoleónica) por todo el primer tercio del presente siglo, reinó el más completo abandono, en términos que poco faltaba al palacio para caer deshecho, cuando la reina D<sup>a</sup> María Cristina mandó emprender grandes reparaciones, proseguidas durante el reinado de Isabel II, y que aun continúan, si bien la pequeña cantidad asignada por el Estado a la conservación del Monumento, solo permite atender a una parte del Palacio, dejando casi abandonado lo demás y todo el recinto, salvo dos torres y los jardines.* A raíz del incendio generado en 1890 en una de las galerías del palacio nazarí abrió la polémica sobre la protección del inmueble. De ahí que a comienzos de 1900 se fue poniendo las bases de un marco administrativo protector del monumento.

Política Institucional	Disposición Normativa
La Comisión Especial de la Alhambra	Real decreto de 19 de mayo de 1905.
Patronato de Amigos de la Alhambra.	Real decreto de 14 de marzo de 1913
Patronato de la Alhambra.	Real Decreto de 16 de enero de 1914
Dirección general de Bellas Artes.	Real decreto de 23 de abril de 1915
Conservación del Parque de la Alhambra.	Real orden de 30 de agosto y 4 de noviembre de 1920
Adquisición del Generalife,	Real Decreto de 12 de octubre de 1921

#### 6.5.1. La Comisión Especial de la Alhambra como primera institución pública administrativa y su política de adquisición de bienes inmuebles.

conjunto monumental. Finalmente, el paso definitivo se daría en marzo de 2004 al ser definido como una unidad paisajística, con su declaración como Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. Cfr, CHAMORRO, Victoria E., 2006, pp.103-104.

<sup>2817</sup> CRUCES, E. "Instituciones y organismos que han gestionado la Alhambra y el Generalife (siglos XIX y XX)" *Cuaderno de la Alhambra*, Vol. 35. Granada, 1999. pp.113-140.

<sup>2818</sup> CASTILLO RUIZ, J. "La valoración paisajística de la Alhambra en los libros de viajes y su reconocimiento tutelar en la declaración de ésta como Monumento Nacional en 1870". *Cuadernos de La Alhambra*, Vol. 29-30. Granada, 1993-1994.

En virtud del **Real decreto de 19 de mayo de 1905** se creaba la Comisión especial para administrar el recinto de la Alhambra, comprendiendo los alcázares, parques y jardines<sup>2819</sup>, introduciéndose el valor paisajístico entre los valores a conservar, no habitual en la época que analizamos. Carlos María Corte en la exposición de motivos del real decreto aludiría la creación de esta institución en el estado de decadencia que se encontraba el conjunto palatino, y la inmediata actuación que debía de llevar a cabo el Gobierno para su salvaguardia, poniendo *los medios que convendría poner en acción para remediar los deterioros y estragos que el tiempo ha ocasionado en la preciosa obra, evitando, en lo posible, que ulteriormente pudieran ocasionar su definitiva ruina*. La nueva institución se crearía en Granada, bajo la dependencia inmediata del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad los alcázares, recinto, parque, jardines y dependencias de la Alhambra (art.1º), estando constituido por tres Vocales nombrados de Real orden, entre Arquitectos, Ingenieros, Arqueólogos de notoria nombradía por sus publicaciones, o entre individuos de la Comisión provincial de Monumentos, con residencia en Granada (Art.2). De Real orden también se designaría al Presidente de la Comisión, así como el Vocal o Vocales que deben desempeñar los cargos especiales de Conservador Mayor y de Director de la Conservación, debiendo ser desempeñado este último por un arquitecto (art.3). Asimismo sería establecido en el artículo 5º con una amplia precisión las facultades que tendría el Presidente en las convocatorias de reuniones, que tendría que ser con la frecuencia necesaria y cuando lo pida alguno de los Vocales, así como la de fiscalizar como Delegado del Ministro, todos los actos de administración. El cargo de Presidente será incompatible con el de Conservador Mayor y Director de la restauración. Por su parte, el Conservador mayor tendrá, bajo la dependencia inmediata de la Comisión, las atribuciones especiales que van implícitas en los números siguientes: 1º. La jefatura de todo el personal asignado a la Alhambra; 2º. Tener a su cargo los edificios, dependencias, materiales, herramientas y utensilios de todas clases que sean propiedad del Estado, según inventario; y 3º. La Tesorería y Habilitación para los gastos del material, de obras y de oficinas, incluidos en los presupuestos del Estado (art.6). Al mismo tiempo, el Director de la restauración tendría, bajo la dependencia de la Comisión, la dirección técnica de las obras ordinarias y extraordinarias de conservación y restauración, formulando y autorizando los oportunos proyectos (art.7). En el caso que estos proyectos no puedan ser causa de variación en el estilo arquitectónico del monumento, su importe no exceda de 1000 pesetas y pueda ser abonado dentro de los créditos ordinarios de los presupuestos, podrían ser aprobados por la Comisión, sin más trámite que el conocimiento inmediato, y siempre atención a su ejecución, que habrá de darse a la Superioridad (art.7).

---

<sup>2819</sup> GALLEGO Y BURÍN, A. *Granada, Guía Artística e Histórica de la Ciudad*. Madrid, 1961.



Todos los años se consignará en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes cantidad suficiente, que no bajará de 40000 pesetas, para los gastos ordinarios de conservación de la Alhambra, y su importe se librará mensualmente por la Ordenación de pagos, considerándose autorizado el servicio hasta la suma que se consigne en el presupuesto. Dentro de la cantidad presupuesta con carácter ordinario, la Comisión formulará y aprobará anualmente el correspondiente presupuesto especial. En éste se señalará con la conveniente separación la parte de crédito que mensualmente haya de asignarse a cada uno de los servicios constantes de oficina, limpieza, alumbrado, etc. Del resto del crédito destinado a obras en ese presupuesto especial formulará la Comisión mensualmente la oportuna distribución de fondos, según los acuerdos tomados por ella y la conveniencia de la mayor rapidez en una obra cuando haya sido emprendida (art.12). En los casos que fueran gastos especiales y extraordinarios de obras de reparación y restauración del monumento se consignará en el proyecto de presupuestos generales del Estado las cantidades necesarias, cuyo importe deberá ser invertido previa formación de presupuesto especial que redactará el Arquitecto-Director de la Conservación, autorizará la Comisión y será aprobada en la forma determinada para estos servicios en el reglamento de las Construcciones Civiles (art.13). Finalmente cabe señalar como se subrayaba que la creación la Comisión especial de la Alhambra se entendía hecha *sin merma de las atribuciones conferida legalmente a la provincial de Monumentos y a las Academias que tienen como especial y honroso encargo el velar por los Monumentos artísticos e históricos*. Por Real Orden de 5 de mayo de 1908 se ordenaría a la Comisión Especial hacer una propuesta de reglamentación para regular la entrada a la Alhambra, *sobre la base de satisfacer una pequeña cuota por tal concepto y para remediar así uno de los principales problemas del monumento que era la falta de dinero*. El 7 de abril de 1909 se aprobaría el reglamento de régimen de entrada, fijándose por primera vez el precio de vista a la Alhambra, probablemente el primer Monumento Histórico Nacional de España. En 1909 Luis Seco de Lucena amplía la información sobre esta Comisión en su *Guía Práctica y artística: La Alhambra depende del Estado, hallándose a cargo de una Junta Especial compuesta de Presidente, del Restaurador Mayor y del Arquitecto. Las peticiones y reclamaciones deben dirigirse al Restaurador Mayor D. Miguel Gómez Tortosa, que tiene su domicilio en la misma Alhambra*<sup>2820</sup>.

**6.5.2. Un caso de conflicto de dominio sobre un bien inmueble declarado de interés histórico y artístico: La supuesta venta de la Torre del Vino. La Real orden de 10 de julio de 1912.**

El diputado Morote daba una dramática descripción de la situación jurídica que se encontraba algunos de los bienes inmuebles que pertenecían al

<sup>2820</sup> SECO DE LUCENA, L. *La alhambra como fue y como es*

conjunto palatino nazarí: *La Alhambra no solo estaba cercada, circundada por la codicia particular, sino que era realmente objeto de un verdadero, de un escandaloso asalto. Hace muchos años esa codicia particular se iba apoderando de todo, construyendo sobre piezas y parte de aquel edificio casas particulares, cubriendo con toscas pinturas aquellas partes de que se apoderaban y pretendiendo ganar por la prescripción pedazos de la Alhambra. A tal extremo han llegado allí estas cosas, que una de las torres más hermosas de la Alhambra estaba totalmente cubierta por una de esas groseras construcciones, y uno de los visitantes de la Alhambra, un extranjero (...) adquirió, pagándolo muy bien, esa casa y la regalo a la Alhambra. Con respecto a la Puerta del Vino, llamaba la atención al Ministro de Instrucción Pública hace más de un año exponiéndole que sobre esa puerta se había construido un caserón, que esa casa había sido hipotecada por sus dueños, que no habiéndose satisfecho la deuda, el crédito hipotecario, había sido objeto de un procedimiento ejecutivo y la casa iba a venderse en pública subasta (...) Aquella construcción hecha para apoderarse de la Puerta del Vino como lo que se hiciera para apoderarse de cualquier pedazo de la Alhambra, es una construcción que no puede dar derecho alguno de dominio de propiedad sobre la Puerta del Vino. ¿Es que se puede adquirir por prescripción un monumento nacional? ¿Es que algunos de vosotros (...) se os puede ocurrir que pueda irse ganando la propiedad de la Alhambra ni la de ningún monumento nacional por semejante procedimiento?(...). Por lo que reclamaba que no hubiera ninguna parcela de la Alhambra que pudiera ser adquirida por el dominio privado: llamo la atención del Ministro de Instrucción Pública para que procure aislar la Alhambra, procure romper el cerco, procure poner término al asalto de esas codicias particulares, porque si no en cada una de aquellas torres, en cada uno de aquellos arcos, en aquellos reductos de aquella obra monumental se encontrará muy pronto el Sr. Ministro de Instrucción Pública con gentes que, amparándose en expedientes posesorios, invocando la prescripción, irán apoderándose de pedazos de aquella joya, y cuando el Sr. Ministro vuelva a reconstituirla, entonces se tropezará con dificultades análogas a las de hoy, con que en una subasta se duplica el precio de licitación, y se convierte no solo en un verdadero atentado a la propiedad del Estado, al tesoro artístico de la Nación, sino que se convierte a la vez en una lucrativa industria que pueda originar fraude de gran consideración, de gran importancia, porque fácil es construir cualquier edificio ganando un trozo de la Alhambra, y por análogos procedimientos al que ahora examinamos, preparar pingües negocios disponiendo las cosas de modo que sea posible obtener considerables indemnizaciones del Estado*<sup>2821</sup>.

Con motivo de la subasta judicial de una casa contigua a la expresada edificación árabe que forma parte del histórico monumento, sería promulgada la **Real orden de 10 de julio de 1912**, por la que se intentaba resolver la situación jurídica del inmueble. Se hacía referencia en la disposición al estado legal de dominio del inmueble: *Resultando de los antecedentes aportados por la Abogacía del Estado respecto a las transmisiones de dominio del referido inmueble hasta la última que ha dado lugar a los incidentes suscitados con la*

---

<sup>2821</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso, Núm.142, Sesión de 19 de junio de 1912, p.3961.

*torre indicada, que ésta no ha sido vendida, y que la confusión nace de que una parte de la casa enajenada contigua a la famosa Puerta apoya en ésta un lado de sus fábricas y avanza sobre ella con una de sus habitaciones(...), al mismo tiempo que dejaba claro el dominio público del conjunto monumental a la que pertenecía la torre: ni ha sido ni puede ser objeto de venta particular, toda vez que dicha construcción se haya comprendida entre las que pertenecientes al Estado constituyen el recinto de la Alhambra, y es totalmente independiente de la casa en cuestión, aun cuando ésta aparezca con un derecho de servidumbre sobre la referida Puerta por las razones antedichas. Se especificaba como el comprador del inmueble anexo a la puerta, D. Antonio Linares, había elevado una instancia al Ministerio por el que cedía al Estado la parte que recae sobre la referida puerta, o sea la habitación que a ésta corresponde, y renunciando, por tanto a todo derecho de propiedad sobre la misma para dejar la torre con independencia absoluta de cualquiera otra edificación que no pertenezca al monumento de la Alhambra. Al no haber sido enajenada y estar definida su propiedad a favor de la Administración, no se tendría que proceder al derecho de tanteo y retracto que la Ley de 7 de julio de 1911 preceptuaba en caso de la venta de la Torre del Vino, por lo que se aprobaba el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos de Granada, de conformidad con el dictamen emitido por la Abogacía del Estado en la Delegación de Hacienda de dicha provincia (1º), por lo que se admitiría la cesión hecha por Linares, dueño de la casa colindante con la expresada Puerta, de la habitación situada sobre ésta, por lo que la Comisión Provincial de Monumentos debería tomar posesión, en nombre del Estado, de la parte que se indica del referido inmueble, y a establecer la independencia que corresponda, cerrando la comunicación que exista con el resto de la casa y abriendo otra separada(2º).*

### **6.5.3. El Real decreto de 14 de marzo de 1913 creándose un Patronato de Amigos de la Alhambra.**

El 14 de marzo de 1913, por el Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se crea el Patronato de Amigos de la Alhambra, bajo el protectorado del Ministerio de Instrucción Pública, con el fin de *conservar, restaurar y dar el debido realce al recinto*, como así se reconoce en la Exposición de Motivos, así como *de fomentar cuanto tienda a favorecer la restauración del monumento y la obtención de recursos o donaciones con ese mismo objeto*. El peligro de la desaparición de este inmueble fundamentaba la creación de esta nueva institución: *El peligro constante, que solo milagrosamente ha podido conjugarse, de que se pierda tan preciosa joya para las generaciones venideras, debe servirnos de lección provechosa para no descansar en la tarea que podamos ofrecerla a los ojos de sus admiradores en un estado que acierte a reflejar la grandiosidad de aquellos lugares que en días lejanos supieron conquistar los antecesores de Vuestra Majestad. Los tiempos modernos, celoso de la conservación de todo lo pasado, como complemento de la tradición y de la historia, han procurado la restauración del Monumento y la consolidación de los sitios amenazados de ruina.* El Patronato

estaría constituido por un Presidente y cuatro Vocales, nombrados de Real Orden, recayendo el cargo de Presidente en persona de notoria competencia artística que se hubiera distinguido por su entusiasmo y apoyo a favor de las Artes o de las Letras y designando a los Vocales por el siguiente orden: 1º El Inspector especial del Monumento, Presidente de la Junta facultativa de las Construcciones Civiles; 2º) Un individuo de la Comisión de la Alhambra, creada por Real decreto de 19 de mayo de 1905. 3º) El Comisario Regio de Turismo y 4º) El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Granada (art.2º). Los fondos del Patronato estarían constituidos por la asignación presupuestaria que a su nombre figurasen en el presupuesto del Estado, por las donaciones particulares que reciba y por los recursos que obtenga mediante exposiciones o Certámenes de carácter artístico o literario (art.3º). Obligación primordial del Patronato sería el promover el apoyo de las Corporaciones y entidades y el de las personas de elevada posición en Granada que más pueda favorecer la concurrencia de turistas con la reducción de precios en los billetes de los trenes y la celebración de fiestas y espectáculos que en determinadas épocas conviertan aquellos lugares en sitio de artístico recreo y que sirvieran de atracción a los visitantes (art.4º). El Patronato alentaría la formación de una Junta denominada de Propaganda, en la que tengan la Industria y el Comercio la oportuna representación y que sirva de poderoso auxiliar a los propósitos indicados (art.5º), y organizaría anualmente conferencias y cursos breves de Arte y Literatura árabes, de acuerdo con la Junta de ampliación de estudios y centros de estudios históricos de Madrid y Granada (art.6º), a la vez que propondría la creación de un Museo de Arte Árabe en Granada, sometiendo a la resolución del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes las bases para su adecuada instalación (art.7º). El Patronato sometería como órgano dependiente, la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el oportuno Reglamento, que debía de emitir el correspondiente informe la Sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (art.10). Por virtud de la Real orden de 17 de marzo de 1913 sería nombrado a Don Santiago Stuart y Falcó, Duque de Alba, como presidente del Patronato de Amigos de la Alhambra, y como Vocales a D. Ricardo Velázquez Bosco, D. Manuel Gómez Moreno, D. Benigno de la Vega Inclán. Marqués de la Vega Inclán y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granada (Gaceta de Madrid, núm.78, 19 de marzo de 1913, p.730). Durante este periodo, se intenta adquirir un grupo de inmuebles que se consideraba indispensable para la conservación del conjunto palatino. Así, el 29 de diciembre de 1913 se envió por parte de la comisión la propuesta de adquisición de una serie de fincas, entre las que se encontraba la conocida como la de Villaoslada, conocida como la de las pinturas de El Pital, que lindaba por la derecha con la torre de las Damas, propiedad por entonces de Modesto Cendoya. Sin embargo, la pugna entre la Comisión Especial y el Patronato de Amigos de la Alhambra se llevaron a realizar por la pugna que se va dar entre los dos órganos por el control del monumento, hecho que llevaría a crearse un nuevo órgano, en

virtud del Real decreto de 16 de enero de 1914, el llamado Patronato de la Alhambra.

#### 6.5.4. Un nuevo organismo institucional: El Patronato de la Alhambra.

Los conflictos institucionales entre la Comisión Especial y el Patronato de Amigos de la Alhambra llevarían al Gobierno en 1914, siguiendo a Leopoldo Torres Balbas, a constituir un nuevo Patronato, por el **Real Decreto de 16 de enero**, por el que se uniría en uno sólo el mandato encomendado a los anteriores organismos, que según su Presidente, Guillermo J. de Osma, tenía como misión *conservar, consolidar y respetar la Alhambra... La que nos incube conservar no es la que vivieron Mohamed y Boabdil: es lo que resta de aquellas; más lo que en ella actuaron los siglos sucesivos: más también lo que ha aportado la naturaleza*<sup>2822</sup>. Por consiguiente, con la promulgación del Real decreto de 16 de enero de 1914 se constituiría el Patronato de la Alhambra, nacido como ya se refleja en la propia Exposición de Motivos como consecuencia de los deficientes resultados que había supuesto la existencia de dos organismos paralelos, la Comisión especial y el Patronato que tutelara a la Alhambra, aunque en un principio se consideró *perfectamente posible*, cuya finalidad primordial fuera que *la Alhambra fuera, no sólo el monumento arquitectónico digno de estudio y admiración constante, sino una completa propiedad del Estado que, alejando aquellas intromisiones para su misma conservación perjudiciales, separara todo fin industrial en ella establecido, evitando el peligro que determina la existencia, dentro de su recinto, de algunas propiedades particulares, a cuya aplicación y uso no puede ponerse el veto necesario por la Autoridad gubernativa*. Sin embargo, como se seguía aludiendo que *la falta de unidad la dirección por la existencia de los dos organismos, tal vez hayan entorpecido la rápida marcha emprendida, llegando al punto de hacer difícil y precipitada la inversión de alguna parte de los créditos presupuestos*, por lo que se consideraba *unificar la dirección y ejecución de las obras precisas a la conservación y restauración de la Alhambra, dándole el verdadero carácter que debe tener aquel grandioso monumento e invirtiendo con utilidad los créditos que aun figurando en artículos distintos del vigente presupuesto de gastos públicos de este Ministerio se dedican al mismo objeto y finalidad*.

De esta manera se constituía un Patronato denominado de la Alhambra, por el que se le confiaban todas las facultades y funciones atribuidas y concedidas por los Reales decretos de 19 de mayo de 1905 y 14 de marzo de 1913, a la Comisión especial y al Patronato de aquel Monumento (art.1º). El Patronato estaría constituido por personalidades competentes en los diversos órdenes de actividades técnicas que a la Alhambra conciernen y que lleven, además, la representación de aquellas *Corporaciones* facultativas interesadas en la conservación del Monumento. Entre sus miembros se encontrarían

<sup>2822</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo *En torno a la Alhambra* Crónica Arqueológica de España Musulmana, 7, 1960, p.104.



insignes personajes del mundo de la cultura, como fuera ya ex ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Guillermo J. Osma, quien ostentaría la Presidencia, el historiador del arte y arqueólogo Manuel Gómez Moreno, que actuaría como secretario, a los que se añadirían nombres como el Marqués de la Vega-Inclán; el arquitecto Velázquez Bosco y Elías Tormo, que serían designados como Vocales. Su nombramiento será de Real Orden, y su número no podrá exceder de 11 (art.2). Se nombraría para ello a un Presidente por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre sus atribuciones estarían el desenvolvimiento de las iniciativas del Patronato, presidir sus sesiones, ostentar su representación para todo acto o relación con tercero y comunicación inmediata con los Poderes públicos y con la Autoridad para llevar a la práctica los acuerdos que el Patronato adopte (art.3º), siendo designados como vocales natos el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Granada y el Arquitecto designado por el Ministerio de Instrucción Pública para las obras de la Alhambra, teniendo éste a su cargo la dirección técnica de las mismas, con arreglo al criterio y planes del Patronato, por el que formularía proyectos, que serían sometidos a la directa aprobación del Ministerio de Instrucción Pública sin otro trámite (art.4º). Se dispondría que hubiera un secretario *encargado de velar por el cumplimiento de los acuerdos del Patronato, allegar cuantos elementos de información sean útiles, y divulgar por todos medios el mejor conocimiento de la Alhambra*, siendo el cargo retribuido, asignado por el propio Patronato, para lo que figuraría en los presupuestos sucesivos (art.7º). El Patronato podrá delegar en el Presidente, y ésta a su vez en alguno o algunos de los Vocales, el todo o parte de sus atribuciones para cualquier caso concreto (art.8). A su vez sería designado un Administrador, entre los vocales, el cual quedaba autorizado para efectuar todos los cobros y pagos a consecuencia de los acuerdos del Patronato, sin otra intervención que la del Presidente, rindiendo después cuentas a la Corporación que a su vez se convierte en cuentadante, con relación al Ministerio de Instrucción Pública, para todos los efectos legales (art.8). De carácter inmediatamente ejecutivo serían calificados los acuerdos del Patronato, siempre que recayeran dentro de las facultades que se le había sido conferidas, al mismo tiempo que para el régimen interior del recinto de la Alhambra la se elaboraría un Reglamento, que sería sometida a la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, pidiéndose antes de su aprobación definitiva, un informe a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (art.6). Unos meses después, en virtud de la **Real orden de 28 de febrero de 1914**, se intentaría dar una mayor potestad a la nueva institución tutelar, disponiendo que pudiera adoptar las medidas que juzgase oportunas para la conservación y fomento del parque, jardines y demás plantaciones comprendidas en el recinto de la Alhambra, *teniendo en cuenta la unidad que debe haber en todos los servicios que afectan a aquella histórica residencia y la conveniencia de que estén subordinados a una misma Autoridad para la mejor ejecución de cuantos acuerdos se adopten por el Patronato, se ha servido disponer que las Reales Ordenes de 27 de octubre de 1911 y 27 de junio de 1913, dirigidas por*

*este Ministerio al de Fomento, con el fin de que los Ingenieros Agrónomos procedieran al reconocimiento del arbolado de la Alhambra para combatir las plagas de insectos o enfermedades que pudieran perjudicarle, se consideren sin aplicación alguna, quedando a la resolución del Patronato, y, por tanto, de su Presidente la adopción de las medidas que juzguen oportunas para la conservación y fomento del parque, jardines y demás plantaciones comprendidas en el recinto de la Alhambra, de Granada.*

Sin embargo, entre las funciones que tenían encomendadas el Patronato la más importante sin duda sería la administración de los fondos presupuestarios para las obras de conservación y restauración de la Alhambra y especialmente la adquisición, por compra convenida, o por expropiación, de aquellas propiedades que, dentro del recinto, se estimase conveniente o preciso adquirir para el Estado, al mismo tiempo que como preceptúa el artículo 5º, cuidaría de establecer todas aquellas medidas de policía dentro del recinto necesarias, no solo para la conservación de la propiedad general del Estado, sino para evitar cualquier explotación industrial en aquel sitio o cualquier acto o hecho incompatible con su verdadero concepto artístico. En la junta de patronato de 22 de abril de 1914 se puntualizaría la adquisición de las Casas más próximas al conjunto nazarí, en especial la Puerta del Vino, bien por compra o mediante expropiación. Sin embargo, las actuaciones realizadas por Guillermo Osma, presidente de este órgano no darían gran resultado, ya que no consiguió formalizar la adquisición de algunas de las casas del Partal, ni siquiera la casa colindante con la Puerta del Vino, probablemente hecho que le llevaría a su destitución, como así apunta Alvarez Lopera. Por virtud de la **Real Orden de 12 de abril de 1914**, se dispondría la declaración de utilidad pública, a los efectos del artículo 4º de la ley de 7 de julio de 1911, la adquisición de las casas siguientes, de propiedad particular, enclavadas dentro del recinto de la Alhambra (art.1º), aprobando, en caso alternativo, la compra con el precio de 47.100 pesetas de otros edificios particulares (art.2º), y autorizando al Patronato, en el caso de compra a que se refiere el apartado anterior, para conceder a los dueños de dichas casas un plazo de prórroga de ocupación de las mismas, en términos de arriendo, en tiempo que no rebase la fecha de 30 de junio de 1917 (art.3º).

En el Congreso sería ampliamente criticada la gestión llevada a cabo por la institución, como se refleja en el discurso del diputado Igual y Martínez: (...)con la cantidad de 150.000 pesetas liquidó el año pasado sus trabajos la Alhambra, sin haber aplicado una sola peseta a conservación y restauración, y habiéndose dedicado esa cantidad, o al menos la mayor parte de ellas, a expropiación de casas y construcciones que están situadas, sí, en el recinto de la Alhambra, de moderna construcción, pero independientes en absoluto de cuanto constituye la parte artística y monumental de aquel recinto (...) Señores Diputados, para darse cuenta de lo que esto quiere decir, he de hacer la aclaración siguiente: mientras el Patronato de la Alhambra paga 70.000 pesetas por una casa moderna que ha sido comprada hace

*algunos años por la mitad de este precio, y no tiene mérito ni valor artístico, la Torre de Comares, donde se encierra el Salón de Embajadores, amenaza ruina (...) y como ella se encuentra el Patio de los Leones, es decir, que la parte más importante y más sagrada, digámolo así del monumento árabe, amenaza ruina, y cuando esto sucede, el Patronato de la Alhambra gasta la consignación que las Cortes le han dado y los ingresos de sus entradas, en expropiar casas de la Alhambra que no tienen valor ninguno y, además apoya la expropiación en leyes que en este caso no tendrían aplicación, porque no la tiene la Ley de Excavaciones artísticas<sup>2823</sup>. Los trabajos del Patronato serían duramente criticado por el diputado Rivas Santiago: Es inútil todo lo que se quiere hacer en la Alhambra sobre la base del Patronato(...) Hay que establecer un régimen en virtud del cual haya un arquitecto, en mi concepto solo debe de haber uno, que se dedique a hacer planos y proyectos de restauración y aseguramiento de los alcázares y de las torres, que tanto valor artístico tienen; que haya una parte administrativa compuesta de un contable y un pagador, y que para examinar los planos y los proyectos que el arquitecto presente, se constituya en Madrid una Junta, que aquí resida, constituida por los arquitectos más distinguidos y que más conocimiento hayan demostrado en el arte árabe, por las autoridades más esclarecidas en la crítica del arte, presididos todos por el director de la Academia de San Fernando. Esta Junta debe examinar los proyectos y planos que el arquitecto envíe, y una vez aprobados, encargar la ejecución con plena y absoluta libertad; claro es que reservándose esta Junta el derecho de mandar un delegado de su seno para que pueda un momento dado si el arquitecto cumple con su deber, si responde a las indicaciones, consejos o inspiraciones de la Junta o si por el contrario, no realiza los proyectos en condiciones que respondan a la conservación del monumento artístico (...) La labor del Patronato se ha reducido exclusivamente a reunirse dos veces bajo la presidencia del Sr. Osma, a no gastar ni una peseta de la consignación aquí hemos pedido siempre los granadinos<sup>2824</sup>. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Conde de Esteban Collantes, resumiría la situación que de hecho se estaba produciendo en el ámbito tutelar del edificio nazarí, tanto desde el plano puramente estético: ¿Cómo se ha de conservar? Aquí entran ya los diferentes criterios (...) yo diría que desde el tiempo de los Reyes Católicos ha habido diversos sistemas, diversos pareceres, diversos criterios para haber como se consolidaba, como se conservaba ese monumento, como administrativo: (...) Después de ésta que por lo visto era la más útil (se refiere al Patronato fundado en 1905), se formó una especie de organismo que se llamaba Patronato de Amigos de la Alhambra, que no llegó a organizarse (...) En la actualidad el Patronato que parece que es defectuosa, defendiendo al mismo tiempo la política de expropiaciones que se había dado en torno al recinto: A propósito de las expropiaciones. Hay quienes creen que lo primero que hace falta es asegurar la Alhambra (...) para asegurar es por lo que ha habido que expropiar varias casas, que amenazaban verdadera ruina, porque por sus servidumbres, por las filtraciones a que*

---

<sup>2823</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Núm. 126, Sesión de 27 de enero de 1915, pp.3924-3925.

<sup>2824</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Núm. 126, Sesión de 27 de enero de 1915, p.3926.

*daban lugar perjudicaban notablemente a este magnífico edificio*<sup>2825</sup>. La crisis del Patronato sería un hecho a principios del año 1915, especialmente por los conflictos personalistas que se produjeron entre el Presidente Osma y el arquitecto Cendoya, que se resistía a los mandatos de la institución tutelar, que queda fuera de este estudio, pero que no cabe duda reflejaba la inoperancia en articular un verdadero organismo tutelar como había ocurrido en las etapas anteriores. Así en enero de 1915, Osma dimitiría del cargo, quedando fortalecido la posición del arquitecto restaurador, Cendoya, siendo suprimido el Patronato a raíz de la Real Orden de 23 de abril de 1915.

#### **6.5.5. El Real decreto de 23 de abril de 1915 por el que se instituye la Dirección general de Bellas Artes.**

En virtud de la Real Orden de 23 de abril de 1915 se establecería una mayor centralización administrativa en la tutela del conjunto nazarí, ya que como recogía la Exposición de Motivos había fracasado los anteriores Reales decretos de 1905, 1913 y 1914, por lo que se aconsejaba trazar, sin pérdida de tiempo, un nuevo plan más definido y más enérgico, y, por lo tanto, más eficaz, *que pusiera a salvo a la Alhambra del peligro que la amenaza, y a la generación presente de los severos juicios que en su día pudiera formular la Historia acerca de una negligencia inconcebible que nunca fue sentida ni mucho menos practicadas*, para lo que se debía de redactar un proyecto de conservación y consolidación el cual abarcara no solo la obra de la época de dominación árabe, sino también la posterior a la Reconquista y anterior al siglo XVI, para lo que sería informado por las Corporaciones oficiales que designase el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y luego fuera ejecutado sin alterarlo en lo más mínimo. Cuando estuviese asegurada la existencia de la Alhambra, se reglamentaría la obra que a la restauración se refiere, y para llevar a cabo esta segunda empresa tan discutida y delicada, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, oyendo nuevamente a las Corporaciones oficiales competentes en la materia, trazaría el plan correspondiente.

Con la promulgación de la **Real Orden de 30 de abril de 1915** quedaría declarado disuelto el Patronato de la Alhambra de Granada. Como novedad institucional se dejaría al cuidado y conservación del conjunto palatino a la Dirección General de Bellas Artes, sin perjuicio de que pudiera crear y organizar posteriormente las instituciones complementarias que juzgase convenientes para la buena administración y régimen de los servicios necesarios a la ulterior conservación del Monumento (art.1º). A las órdenes del Director estaría un Arquitecto, Vocal de la Junta de Construcciones Civiles, que será nombrado Inspector especial del Monumento; Un Arquitecto, Director general de las obras, un Administrador y el personal además necesario para la conservación y servicios del Monumento, comprendido en la plantilla especial

<sup>2825</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Núm. 126, Sesión de 27 de enero de 1915, pp.3928-3929.

que éste tiene consignada en el presupuesto (art.2). Los servicios de la Alhambra de Granada se clasificarán en los grupos siguientes: De conservación y sostenimiento; De consolidación y reparación; De restauración; De investigación y exploración y de expropiaciones (art.3). Entre los servicios de conservación y sostenimiento comprenderían los jornales de guardia, inspección y vigilancia, riegos, limpieza, cuidado y repoblación de parques y jardines; los de material para ello necesario, material de oficinas y otros análogos, y como excepción las obras parciales de escasa importancia cuya cuantía no exceda de 1500 pesetas y que se juzguen de absoluta urgencia para la esmerada conservación del edificio, siempre que no impliquen alteración alguna en el estado actual de las construcciones (art.4º). En virtud de esta Real Decreto sería nombrado como arquitecto inspector especial del monumento, a Ricardo Velázquez Bosco<sup>2826</sup>.

La verdadera novedad radicaba primordialmente en la formación de un plan general con proyecto y presupuesto para las obras de consolidación y reparación –de investigación y exploración– y de expropiaciones (art.6). En el plan general se precisaría detalladamente y se fundamentaría la extensión y marcha que deberán llevar los trabajos y la prelación que habrá de darse a cada uno de ellos. Para la redacción de este plan se tendría en cuenta el estado de mayor o menor peligro de ruina en que cada parte se encuentre, y también el estado de abandono en que se halla (art.7). Al mismo tiempo, no se ejecutaría ninguna obra sin que previamente estén aprobados el proyecto y presupuesto de la misma (art.8). Se instituía a su vez un estricto procedimiento a la hora de realizar las investigaciones o exploraciones, ya que cuando tuvieran por objeto descubrir partes que estuvieran ocultas por otras construcciones o enterradas por escombros o tierras que por derrumbamientos o por cualquier otra causa hayan ido acumulándose con el tiempo, siempre que para ello no sea preciso destruir parte alguna del monumento anterior al siglo XVII, así como tampoco en jardines y arbolados. En caso de encontrarse alguna de estas características, el Arquitecto Director daría cuenta a la Dirección general de Bellas Artes a fin de que dispusiera una investigación o se determine lo que debe hacerse en cada caso (art.9). El plan, proyecto y presupuesto de las obras estaría formulada por el Arquitecto director en el plazo máximo de cinco meses, siendo sometidos a Informe de la Real Academia de Bellas Artes y las demás Corporaciones que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Arte juzgara conveniente consultar, cuyos Centros deberán informar antes de los dos meses de la fecha en que se le pida el dictamen (art.10). Una vez aprobados el plan, proyecto y presupuesto y marcha de los trabajos, no podían alterarse ni hacerse obras que estando aparentemente dentro del proyecto y presupuesto estén en contradicción del espíritu que habrá de informarle, de modo que ninguna parte del monumento pierda el carácter que le han dado y conservado los siglos. Si durante el curso

---

<sup>2826</sup> ALVAREZ LOPERA, J. “La Alhambra entre la Conservación y la Restauración (1905-1915)”. En *Cuadernos de Arte* de la Universidad de Granada. Granada, 1977.



de las obras se juzgara preciso modificar alguna parte del presupuesto, esta modificación seguirá los mismos trámites de formación de proyectos e informes que el primitivo (art.11). En caso de que excepcionalmente el Arquitecto Inspector de la Alhambra estimase de absoluta urgencia de determinadas obras de consolidación y reparación que no permitan demorar su ejecución por el tiempo necesario para que sea aprobado el plan general podía formularlos para su aprobación, aunque contando que la dotación presupuestaria no podrán exceder de 25.000 pesetas en su total importe, aunque solamente sería sometido a informe de la Junta de construcciones civiles, la que deberán informarlos en el plazo de quince días (art.12). Finalmente cabe mencionar la fiscalización presupuestaria que se daría por parte del Administrador de la Alhambra, bajo la inspección del Arquitecto Director, quien debía formular y remitir en el primer mes de cada trimestre una relación detallada de los ingresos obtenidos en la Alhambra para todos los conceptos, y la Dirección general determinará la aplicación que haya de darse a su importe (art.14). La tramitación y aprobación de los presupuestos de obras en la Alhambra de Granada se debían ajustar a las disposiciones generales que regulaban el servicio de Construcciones Civiles del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.15).

#### **6.5.6. Las Reales órdenes de 30 de agosto y 4 de noviembre de 1920 relativa a la conservación del Parque de la Alhambra.**

La concepción de la Alhambra como una entidad unitaria no como elementos aislados dio lugar al interés de conservar incluso el parque que envolvía al conjunto. Como así se expresaba en la Exposición de Motivos *las continuas protestas de la Corporación Municipal y de otros organismos de la capital granadina, en manifestación unánime ante los Poderes Públicos para que se respete y conserve el frondoso bosque que sirve de ornato al histórico Alcázar de los Reyes Moros y de lugar de esparcimiento y recreo al pueblo y a cuantos visitan al artístico y ponderado Monumento*, llevaría al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a disponer la **Real Orden de 30 de agosto de 1920**, por el que el Parque del recinto interior de la Alhambra, sin excepción alguna, y la parte comprendida en el exterior, con inclusión de aquellas especies arbóreas cultivadas en los jardines, quedarían desde la publicación de la presente Real Orden bajo al dependencia e inspección del Cuerpo de Ingenieros de Montes, teniendo en lo sucesivo libre acceso al Monumento para cumplir su cometido (art.1º), en cuanto concernía a la conservación y fomento de la riqueza forestal de la Nación, por lo que el Arquitecto Conservador de la Alhambra prestaría en todo momento al concurso que reclamen los Ingenieros de Montes, con materiales y peones para los trabajos que sea preciso realizar, debiendo cargar estos gastos a los de entretenimiento y conservación del Monumento que se satisfacen del fondo de las entradas (art.4º). Sin embargo, la preeminencia del valor monumental quedaría proyectada en cuanto a que *el Monumento de la Alhambra, con todas sus edificaciones, parques y jardines, dependen de este Ministerio, el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de la provincia de Granada*

*recibirá directamente de la Dirección General de Bellas Artes las órdenes a que haya lugar (art.5º).*

Con la **Real orden de 4 de noviembre de 1920** se daría un paso primordial en la consolidación y reparación del Monumento de la Alhambra de Granada. La importancia del conjunto palatino nazarí en la cultura española, tanto por sus valores artísticos como patrióticos sería fundamento indiscutible para su específica tutela como quedaba así reflejado en la propia Exposición de Motivos, y la asignación presupuestaria correspondiente: *El incomparable monumento de la Alhambra, que es en el Arte, la joya más preciada de la bella ciudad de Granada, viene siendo objeto, hace ya años, de preferente atención por parte de los Gobiernos, que han llevado a los Presupuestos generales del Estado los recursos convenientes para la reparación y consolidación de las diferentes edificaciones que integran el conjunto del famoso Palacio de los Reyes Moros, sin que para ello haya sido preciso en ocasión alguna el estímulo de la iniciativa parlamentaria, como lo demuestran las consignaciones que figuran con el expresado fin en el vigente presupuesto de este Ministerio, por obra exclusiva del Gobierno. La Alhambra no interesa solo a Granada, sino a la Nación entera; porque además de su indiscutible valor artístico en ella se vincula la historia patria durante ocho siglos en la lucha constante contra la denominación mahometana desde la batalla de Guadalete, el año 711, hasta la rendición de las fortalezas granadinas en 1492, ante las huestes de los Reyes Católicos. Estos hechos subrayaban los intereses nacionales del Estado frente a cualquier entidad tanto privada como pública, por lo que su conservación no puede ser patrimonio de Corporación o entidad determinada, ni puede servir de plataforma para demostrar predilecciones interesadas, de una u otra índole en que la pasión, las conveniencias del momento, o el afán de notoriedad, se disfrazan con manifestaciones de altruismo por el Arte más aparentes que sentidas, y veces con desconocimiento absoluto del valor arqueológico, artístico o histórico de la imponderable residencia mora. Cuanto afecta al Alcázar granadino, además del interés local, digno siempre de respeto, porque se inspira únicamente en el entusiasmo propio de los que allí miran el grandioso monumento como herencia sagrada que la Historia y el Arte les legaron, tiene el trascendental de responsabilidad inaludible que impone a todo Gobierno la conservación de aquél símbolo viviente de generaciones pretéritas en que el espíritu de una época, los usos y costumbres y la civilización de un pueblo hallaron tan elocuente representación. Se aludía además de la falta de una rigurosa normativa que suplieran las dificultades presupuestarias y administrativas que habían ocurrido en etapas anteriores, por lo que las varias disposiciones que al efecto se han dictado en defensa de la Alhambra, es forzoso decir que éstas no han llegado hasta ahora a la positiva eficacia que al dictarlas se pretendía en beneficio del monumento, por falta en ellas de una concreta determinación en las funciones facultativas de cada cual, con la exigencia de responsabilidades, al aplicar con liberalidad inexplicable a usos distintos de los ordenados las cantidades libradas para reparaciones en aquellas partes más amenazadas del monumento, o al no hacer oportunamente los pedidos de fondos relativos a proyectos aprobados por la Superioridad, dejando transcurrir apáticamente el periodo económico e invalidando con ello el libramiento autorizado.*

Se programaría de esta manera una intervención exhaustiva en todas las actuaciones referentes a la intervención en el antiguo recinto nazarí. Serían en suspenso todas las obras en curso en el recinto de la Alhambra, desde la publicación de la presente Real Orden, excepción hecha de aquellas que, por su índole especial o por el peligro que ofrezcan al abandonarlas, exigieran su continuación (art.1º). Las únicas obras que se podrían realizar en la Alhambra fuera de los trabajos a que se refiriera a la limpieza y conservación del parque y los jardines, vigilancia y demás servicios de régimen interior, serían las relativas a la reparación, consolidación, apeo, limpieza y decoroso acomodamiento de todos los lugares que así lo requieran, o a las que por un accidente impreciso sea preciso acudir sin demora (art.2º), al mismo tiempo que todo la dote presupuestaria sería destinada para la conservación y reparación del Monumento (art.3º). Como órganos institucionales serían designados una Comisión compuesta del Arquitecto Inspector de la Alhambra y de otros dos Vocales de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, para que, *juntos o independientemente, actúen en el asesoramiento técnico y adecuado desarrollo de los trabajos en curso* (art.5º), y el Arquitecto Conservador de la Alhambra, que sería de las del plan general de reparación y consolidación de las del plan general de reparación y consolidación, que procedería procederá siempre a la formación del correspondiente presupuesto, que fuera remitido al Ministerio de Instrucción Pública, tratándose de excavaciones, aseguramiento de puntos amenazados, descombros o cualquier otra clase de trabajos que sea preciso ejecutar. La tramitación y aprobación de estos presupuestos se harían con carácter urgente, para que no se desmoronase ni por un instante la resolución (art.6º). Al finalizar cada mes el Arquitecto-Conservador dará cuenta al Ministerio de todas las obras que durante ese tiempo se hayan llevado a efecto, tanto de las correspondientes al plan general de consolidación y reparación en curso, como de aquellas otras realizadas por imperiosas necesidades del momento y de los demás trabajos que se realicen en el recinto del Monumento (art.12). Cada tres meses, por lo menos, el Arquitecto Inspector de la Alhambra realizaría una visita al Monumento, para conocer el estado y avance de las obras que se realicen y proponer, si es preciso, la ejecución de otras complementarias o impuestas por previsiones justificadas, dando cuenta al Ministerio del resultado de sus observaciones (art.14). Los tres Arquitectos encargados de la ejecución del plan general de obras de reparación y consolidación tendrían iguales atribuciones en el ejercicio de sus funciones, y de acuerdo con la Comisión inspectora, que hará constar su conformidad al cursar el oficio correspondiente, podrían proponer las modificaciones que estimasen oportunas en el curso de los trabajos, o en la ejecución de otros que se estimasen procedentes o que accidentes imprevistos exijan (art.17). La obligación de conservar y divulgar por parte del Estado de todos los bienes de interés histórico y artístico encontrado en la Alhambra llevaría a disponer que en la Torre de la Justicia, aprovechando el local que la traslación del

Administrador dejaría libre, se procediera al inventario, clasificación y ordenamiento provisional de los objetos y fragmentos hallados en las excavaciones de la Alhambra, para instalar después debidamente, de un modo definitivo, en lugar más amplio y apropiado, el futuro Museo que había de encerrar tantas curiosidades dignas de estudio (art.16).

#### **6.5.7. La adquisición del Generalife por el Estado.**

Durante esta etapa el Generalife entraría a formar parte del Patrimonio Nacional, después de aprobar por **Real decreto de 23 de agosto de 1921** la transacción formulada por D. Giovanni Pacinotti con el objeto de poner término al pleito entre el Estado y la Casa de los Marqueses de Campotéjar, sobre propiedad del Generalife, de Granada, sus huertas, jardines, dehesas y terrenos anexos, por el que el Marqués de Campotéjar *consentiría la Sentencia dictada en primera instancia en 30 de agosto de 1912 por el Juzgado del distrito del Salvador de Granada y presentaría escrito ante la Audiencia, donde pende la apelación interpuesta, declarándolo así y desistiendo de dicha apelación, entendiéndose que además garantiza al Estado español contra todo acto de oposición al desestimiento y sus totales efectos por parte de los Señores Landi, condenados en rebeldía por la Sentencia (1º)*, al mismo tiempo que entregaría *sin demora, a la representación del Estado, el Palacio del Generalife, con sus huertas, jardines, dehesas y cuantos terrenos y edificios hoy constituyen anejos de dicho Real Sitio (2º)*, a excepción de la finca denominada Alijares, que se halla separada de lo que constituye actualmente el Generalife, que sería reconocido de propiedad del marqués (3º). El Marqués entregaría al Estado todos los cuadros y objetos de arte que existiesen en el Palacio, con excepción de los retratos existentes en la sala llamada de los de Granada, que por ser retratos de familia podrán ser recogidos por la representación de la Casa de Campotéjar y que asimismo se detallan en nota (4º), que podemos comprobar que no es considerado como bien público sino que seguía siendo identificativo con la propiedad privada. Como donación particular al Estado, el Marqués cedería la llamada Casa de los Tiros, sita en la ciudad de Granada (...), especificándose que esta donación se haría con el fin de que en dicha casa se instale por el Estado un museo, archivo, biblioteca u otra análoga institución destinada al fomento de la cultura intelectual o artística española (5º), a lo que se uniría la cesión gratuita al Estado de aquellos documentos de su archivo que se refieren al Generalife y todos aquellos otros que a juicio de la propia representación de la Casa no tengan un interés exclusivo para ella y puedan ser útiles para la Historia o el Arte españoles (6º). Se precisaba que como consecuencia de esta transacción se entendería saldadas y finiquitadas todas las cuentas entre el Estado y la Casa de Campotejar, sin que el uno ni la otra tuvieran en lo sucesivo derecho a reclamar indemnización por cualquier concepto por razón de la Alcaldía y bienes del Generalife (14).

Mediante el **Real Decreto de 12 de octubre de 1921** el Estado pudo adquirir el Generalife, tras un pleito que duró casi cien años, contra la Casa de Campotéjar, que se inició mediante demanda interpuesta en 1826 contra los descendientes de Gil Vázquez Rengifo. La adquisición del Generalife no fue un precedente en la expropiación forzosa por el interés público en el marco del conjunto nazarí, ya que durante la vigencia del Patronato de 1914 ya hubo una serie de inmuebles que fueron adquiridos bajo los auspicios del marqués de la VegaInclán<sup>2827</sup>. Girón realizó un magnífico estudio sobre los pormenores del proceso judicial, publicado en la revista *Cuaderno de la Alhambra*. Al final se pactó como salvaguarda del inmueble una escritura de transacción en la que a cambio de un precio simbólico y del reconocimiento de determinados derechos a la Casa de Campotéjar sería entregado el Generalife, sus huertas, jardines, dehesas y cuantos edificios y terrenos constituía el real sitio. A ello se uniría la donación espontánea por parte del propio Marqués de Campotéjar de la Casa de los Tiros, además de los cuadros y objetos existentes en el propio Palacio del Generalife, documentos del archivo del marqués, referentes al Generalife y otros bienes muebles y derechos<sup>2828</sup>. Leopoldo Torr s Balbas plantear a la posibilidad de que se podr a extender la pr ctica de adquisici n en otras ciudades hist ricas, como fue en el caso de Toledo.

Con la promulgaci n del **Real decreto de 12 de octubre de 1921** se dispondr a que el Generalife, contin en a cargo de la Direcci n General de Propiedades e Impuestos, encomend ndose su gesti n a un Patronato. En la Exposici n de Motivos se justificaba la adquisici n del Generalife, primordialmente en base a una mejor tutela institucional p blico: *La transacci n aprobada por V.M. que ha puesto feliz t rmino al largo pleito entre el Estado y la Casa de los Marqueses de Campotejar sobre propiedad del Generalife de Granada y sus jardines y terrenos anejos, enriquece el patrimonio nacional como uno de los m s bellos monumentos del arte ar bigo en Espa a. Pero nada se habr a conseguido si, entregado a manos indoctas, se le hiciera objeto de profanaciones, cuando no se llegara a la total destrucci n por obra del tiempo y de la apat a o incuria de sus guardadores. Ning n medio mejor para impedirlo, a juicio del Ministro que suscribe, que el de encomendar la custodia del bell simo edificio y sus jardines a un Patronato formado por personas de excepcional competencia y bien probado amor a la historia y el arte granadinos, que sin duda conservar n con el esmero que merece la joya que a su cuidado se encomienda.* Para ello se dispondr a que el monumento granadino denominado Generalife, as  como sus jardines y terrenos que le rodean, de propiedad del Estado, continuar n a cargo de la Direcci n general de Propiedades e Impuestos y de sus dependencias en la provincia de Granada,

<sup>2827</sup> Entre los que cabe destacar la casa de Villaoslada, mediante compraventa el 21 de septiembre de 1914; la casa de Gonz lez-Pareja, el 23 de octubre de 1914; el solar de  lvarez de Toledo, por compraventa, el 10 de octubre de 1914, etc (Cfr.CHAMORRO, Victoria Eugenia, 2006, p.249).

<sup>2828</sup> GIRON, C. "El pleito del Generalife, el proceso del Estado Espa ol contra la Casa de Campotejar. Estudio Hist rico-cient fico de un proceso civil". *Cuadernos de la Alhambra*, Vol.35. Granada, 1999, pp. 93-112.



pero encomendándose su administración, custodia, vigilancia y conservación a un Patronato que al efecto se crea y que se denominará de Generalife, el cual funcionará como entidad especial distinta de aquellos organismos (art.1). El Patronato del Generalife lo constituirían, bajo la alta inspección del Comisario Regio del Turismo Excmo. Sr. Marqués de Vega Inclán, el Excmo. Sr. Conde de la Conquista, D. Fernando Vilches, D. José Rodríguez Acosta, D. Francisco de Paula Valladar, D. José Palanco y D. Antonio Gallego, actuando como Secretario y Letrado-Asesor, con voz y voto, el abogado del Estado jefe en Granada o el que el mismo designe de entre los que prestan sus servicios en la misma provincia. Los Patronatos designados elegirán de su seno un Presidente y un Vicepresidente, que sustituirá a aquél en los casos de vacante, ausencia o enfermedad (art.2). Entre las atribuciones del Patronato del Generalife corresponderían: Establecer las reglas más convenientes para la custodia, vigilancia y conservación de los edificios que constituyen el Generalife y su régimen con el público, evitando explotaciones industriales o hechos incompatibles con el alto concepto artístico del monumento (art.6.1); Conservar el verdadero carácter típico que los jardines del Generalife ostentan para evitar alteraciones, forma, sustituciones, corta o poda del arbolado y de las plantas que puedan desfigurar su actual aspecto (art.6.2); Estudiar el estado del monumento, investigando las alteraciones que haya podido sufrir, proponiendo al Ministerio de Hacienda lo que proceda acerca de los edificios que antiguamente sirvieron de entrada y modo de conseguir su habilitación y consolidación, así como las obras que con igual objeto sea necesario realizar en las demás edificaciones hoy existentes (art.6.3); Visitar con frecuencia el monumento y sus jardines para asegurarse de su estado y poder adoptar en tiempo oportuno las resoluciones que parezcan convenientes (art.6.4) y formar el presupuesto anual de gastos e ingresos del Generalife, sometiéndole a la aprobación del Ministerio de Hacienda (art.6.5). Posteriormente a su adquisición desde el Senado, los representantes granadinos Estelat y Amor y Rico pedirían en la citada sesión del Senado de 6 de junio de 1922 que el Generalife fuese declarado Monumento Nacional.

### **7. La tutela pública del Estado sobre las Corporaciones Municipales en el ámbito de la conservación y restauración del Patrimonio Monumental.**

Durante la etapa de Alfonso XIII el fenómeno urbanístico se convierte en objeto de un amplio desarrollo legislativo, como intento de solventar los problemas originados por la expansión territorial y la llamada cuestión social con el incremento demográfico y los problemas higiénicos y de orden público que conllevaban. Se irá produciendo un amplio debate entre arquitectos, políticos e ideólogos, que tendrá una amplia proyección en el diseño y planificación urbanística que se irán produciendo en las ciudades españolas de principio del siglo XX. Las controversias sobre los ensanches y la nueva tipología arquitectónica que se iría insertado en la ciudad moderna

especialmente como reflejo de la identidad de la pujante burguesía que se irá situando en las partes más nobles de la ciudad va a suponer un cambio en la percepción social y morfológico de la propia urbe, especialmente en los tejidos urbanos de raigambre histórico. La concepción de una ciudad que cambia, que sustituye a épocas anteriores y e incluso se superpone a la anterior dará lugar como había ocurrido en otros países europeos, defendido por amplios sectores de la arquitectura española, frente a las posiciones conservacionistas de círculos de eruditos, contraponiéndose el principio de la modernidad urbanística fundamentada en la higiene, la salubridad y la comunicación vial al del valor monumental de las añejas calles, plazas e inmuebles que pudieran presentar un interés histórico, artístico y arqueológico. Serían las Corporaciones Municipales los que al convertirse en los instrumentos vitales de la planificación urbanística se conviertan en los verdaderos paladines de la modernización, instando a los principios de higiene y circulación vial, para lo que comenzará a diseñarse unos planes de derribos de los antiguos bienes inmuebles y transformaciones en los tejidos urbanos que fueran considerados como obstáculos, por lo que en un gran número de poblaciones españolas, sus ayuntamientos aprobarían los consiguientes derribos de murallas, antiguos acueductos, puertas, arquillos y otros bienes inmuebles de interés histórico y artístico, que a falta de una verdadera regulación estatal tuvieron vía libre para realizar dichos proyectos. Serían las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes las instituciones públicas que se opondría en algunos casos al derribo de aquellos inmuebles de interés histórico y artístico, a los que se deben de unir el papel de los periódicos locales y algunas eruditos locales, que abrieron el camino a una concienciación patrimonial sobre tejidos urbanos y bienes inmuebles que eran dignos de conservarse. La respuesta por parte del Estado, que ya se había iniciado en la etapa isabelina, aunque tímidamente, va a provocar una amplia disposición normativa en los principios decenios del siglo XX, en la que se equilibrara los intereses de modernidad urbanística y los valores monumentales. El deber de conservación del Patrimonio Monumental será incluido en la nueva legislación municipal, pero en la práctica a la hora de asumir dichas facultades quedaba subyugada por los intereses particulares que supeditaban los valores de modernidad urbanística sobre los monumentales. Sin embargo, podemos ir precisando en algunas de los casos que van surgiendo en esta etapa algunas limitaciones de actuación de las Corporaciones Municipales sobre aquellos bienes inmuebles de interés histórico y artístico e incluso el propio tejido urbano de la ciudad histórica. Entre ellas podríamos citar los informes que las Reales Academias de San Fernando y de la Historia instaban en los proyectos de ensanches de las poblaciones, en la solicitud que por parte de las Comisiones de Monumentos provinciales y de las propias Academias se hacían para limitar aquellas licencias urbanísticas concedidas por las Corporaciones Municipales a los propietarios privados que intervinieran en los bienes inmuebles de interés históricos y artísticos, El deber de conservación de los restos arqueológicos encontrados en la construcción de plazas y

mercados planificadas por las Corporaciones Municipales, o el debate que suscitaría la conservación de murallas, puertas, y otros bienes inmuebles de interés histórico y artístico que en algunos casos sería autorizado por la propia Corporación Municipal, como fue el caso del derribo de los Caños de Carmona. En la mayor parte de los casos se fue generando un conflicto de competencia institucional entre las Reales Academias, las Comisiones de Monumentos y las propias Corporaciones Municipales, que llevaría a una pérdida patrimonial.

### **7.1. El debate conservacionista del urbanismo español de principios del siglo XX.**

Probablemente el caso hispano sea diferente al resto de los modelos europeos, ya que están más cercanas a una sensibilidad romántica que a la visión cientifista que había ido surgiendo en otros ámbitos culturales fuera de la Península Ibérica. Los derribos de murallas, barrios antiguos y algunos monumentos aislados, siguieron siendo habitual en el ámbito hispano. En el Congreso celebrado en Sevilla en 1917 se enunciarían los criterios que debían seguir el arquitecto para la urbanización y ensanche de poblaciones históricas y modo de enlazar las partes antiguas y modernas. Gómez Millán defendería algunas de las tesis conservacionistas que poco a poco se iba insertando en la concienciación de defensa del tejido histórico de las urbes. De esta manera defendería la confección por parte de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de un índice de poblaciones que merecieran la clasificación de Poblaciones Históricas; la elaboración obligatoria del Informe de la Sesión de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la aprobación de las reformas interiores que se hiciesen en las ciudades. Por su parte, Vicente Lamperez ya apuntaba la dificultad de establecer un verdadero marco legal proteccionista al modo italiano. Las aportaciones de Aníbal González se centraría en la dualidad conservación-modernización de la urbe, por lo que defendería que la reforma interior de las ciudades históricas se harían de tal modo, que en lo posible se conserven la estructura y disposición del primitivo trazado, al mismo tiempo que se debían ejecutar aquellas reformas que impusieran la vida moderna. Ripollés ya apuntaría la necesidad que los Ayuntamientos debían de ser los más interesados en que se conservasen el carácter artístico e histórico de sus ciudades. En los Congresos Internacionales de Arte Público se va abriendo el camino de una concepción estética de la ciudad histórica. Hasta 1915 las reducidas intervenciones sobre esta materia, cuando existían, se limitaban a plantear las cuestiones en boga, especialmente el higienismo. En el Congreso de San Sebastián Manuel Martínez Angel y Pedro Mariño expusieron las Modificaciones que deben introducirse en la legislación para favorecer los modernos trazados de poblaciones y hacer éstas más bellas e higiénicas, sería la primera vez que se aludiría a la belleza en el ámbito urbano. Sin embargo, no fue hasta el Congreso de Sevilla celebrado en 1917 cuando se inicia una adopción de conceptos procedentes del urbanismo

centroeuropeo (concretamente las teorías de Sittle), en la ponencia de Antonio Gómez Millán bajo el título de Criterio que debe seguir el arquitecto para la urbanización y ensanche de poblaciones históricas y modo de enlazar las partes antiguas y moderna, donde ya alude el concepto de urbanización artística<sup>2829</sup>.

## **7.2. La protección de los Monumentos Nacionales en el ámbito de la nueva organización administrativa municipal.**

### **7.2.1. Las Mancomunidades Provinciales.**

Con la creación de las Mancomunidades Provinciales va a dar lugar a una nueva organización administrativa en la esfera del ámbito local, que va a tener un claro reflejo en la protección de los Monumentos Nacionales. Así en el artículo 1º del proyecto de ley se definía la nueva entidad administrativa: *Las provincias representadas por sus Diputaciones podrán mancomunarse para fines exclusivamente administrativos*. En el Dictamen de la Comisión acerca del proyecto de ley sobre mancomunidades provinciales, en su artículo 6º se establecía la posibilidad de delegar el Gobierno en los algunos ramos, como en el caso de los Monumentos Nacionales. Una serie de diputados encabezado por Hermenegildo Giner de los Ríos, presentarían una enmienda al artículo 6º del proyecto de ley, el 2 de julio de 1912, al considerar que no se podía pasar a la mancomunidad provincial sin previo acuerdo de la Real Academia de San Fernando. La enmienda no sería aceptada en la sesión del Congreso celebrado el 4 de julio de 1912, después del debate que se sostendría entre el propio Giner de los Ríos y Pedregal. Giner de los Ríos defendería el papel predominante de la Real Academia de San Fernando en la tutela pública de los Monumentos Nacionales: *entiendo que no están suficientemente garantidos los intereses artísticos si no intervienen en ellos la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Me parece que si tenemos una Corporación de los altos prestigios de esta Academia, en donde están representadas todas las altas personalidades y mentalidades del país, al propio tiempo que los artistas más eminentes de la Patria, conviene mucho pedir su concurso y su opinión siempre que se trate de monumentos nacionales. No olvidemos, Sres. Diputados, que además de dicha Academia (...) están las Comisiones Provinciales de Monumentos Artísticos e Históricos, Comisiones que deben velar constantemente por la conservación y orden de estas Ejecutorias nacionales, habiéndose dado el caso, algunos bien recientes, de que por prescindir de estos trámites sufren el arte o la arqueología nacionales de modo realmente grave para el buen nombre y prestigio de España (...) ¿ Ofrecen las provincias de España, bastantes garantías de gusto artístico y de interés por tales obras, cuando a cada paso vemos depredaciones extraordinarias y dolorosas en los tesoros nacionales de este linaje? (...) No. A la mayor parte de las provincias no le importan las joyas de la arquitectura, la escultura y la pintura*. Curiosamente para el caso de Barcelona, la crítica de Giner de los Ríos sería distinta: *Por consiguiente, yo no habría redactado esa enmienda, si pudieran ser sustituidas la Academia de San Fernando y las Comisiones provinciales de Monumentos artísticos o históricos por otros organismos o centros, si sólo se*

<sup>2829</sup> PEREZ ESCOLANO, Víctor “La recepción española de Camilo Sitte” *Cuadernos de Arte*, N° XXIII, Universidad de Granada, 1992, p.486.

*tratase de Barcelona*<sup>2830</sup>. En la réplica, el diputado Pedregal apuntó el papel que debía representar la Real Academia de San Fernando, sin menoscabar por ello la acción independiente que podría tener el Gobierno en la tutela pública de los Monumentos Nacionales: *Es evidente que no habrá Gobierno algunos que en esas materias prescindan de las autoridades más altas que pueda encontrar, y en esto, de la Academia de San Fernando, o en su caso, de las Juntas provinciales. Ha de asesorarse de ellas, ha de oír su informe; pero no es posible que una facultad de esa naturaleza, una propuesta del Gobierno que ha de venir a las Cortes esté supeditada a la exigencia de un acuerdo de la Academia de San Fernando, ni de ningún otro centro por elevado y prestigioso que sea. No puede haber más que el Informe, y siendo potestativo en el Gobierno pedirlo, que se le pedirá seguramente siempre, pero que no se lo podemos imponer, no pude aceptarse que aquí venga una propuesta con un acuerdo contrario ¿Qué harían las Cortes? ¿Es que las Cortes no podrían votar en contra de lo propuesto por la Academia de San Fernando? Evidentemente sí*<sup>2831</sup>. En el Proyecto de ley de bases sobre régimen local, en su Base Novena se especificaba que entre las competencias de los ayuntamientos se encontraría el fomento y expansión de la educación y de la cultura, y la defensa del patrimonio artístico (8º).

#### **7.2.2. Los arquitectos municipales y provinciales.**

Los arquitectos municipales y provinciales fueron adquiriendo un papel primordial a la hora de tutelar los bienes inmuebles del Patrimonio Monumental. Cabe destacar el Proyecto de bases para la reglamentación de los arquitectos al servicio de las Diputaciones y Municipios, aprobado por el Tercer Congreso Nacional de Arquitectos en 19 de abril de 1904, donde se incluiría una serie de propuestas sobre las atribuciones que deberían de desempeñar sobre la conservación de los Monumentos Nacionales. Se establecería que todos los ayuntamientos de las poblaciones que tuvieran más de 12.000 habitantes, según el censo oficial, los de las capitales de provincia, y las Diputaciones Provinciales, tendrán por lo menos un Arquitecto titular, nombrado en las formas que expresa estas bases (art.1). Entre las atribuciones que le correspondería a los arquitectos provinciales estaría velar por el cumplimiento de las Leyes Provinciales y Municipales en la parte referente a obras, policía y salubridad de las poblaciones, denunciando al Gobierno las infracciones de aquellas que lleguen a su conocimiento (...) (art.7º), ser Vocal nato de (...) Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos (art.8º) y especificaba la obligación de procurar la conservación y reparación de todos los monumentos de la provincia, indicando a la Superioridad los medios más adecuados para ello (art.9.). Entre las atribuciones que serían atribuidas a los arquitectos municipales estaría la de procurar la conservación y reparación de los monumentos, edificios y ornato público comprendidos en el Municipio,

---

<sup>2830</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso de los Diputados, Núm.154, Sesión del jueves 4 de julio de 1912, p.4438.

<sup>2831</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso de los Diputados, Núm.154, Sesión del jueves 4 de julio de 1912, p.4439.



aunque sean de propiedad de particulares, indicando a la Superioridad los medios más adecuados para ello (Art.8º)<sup>2832</sup>.

### **7.3. Los conflictos institucionales entre el Estado y las Corporaciones Municipales en torno a la tutela de los bienes inmuebles de interés histórico y artístico.**

#### **7.3.1. La tutela del Patrimonio Monumental en el Plan de ensanche de las poblaciones.**

Las urbes españolas a comienzo del siglo XX van a seguir experimentando una amplia transformación morfológica con la continuación de la política de ensanches que se amplió en otras ciudades: Cádiz (1910), La Coruña (1910), Mataró (1910), Gerona (1918), Murcia (1920), Pamplona (1920), Lérida (1921) y Oviedo (1925 y 1927). Una gran parte del tejido urbano de raigambre medieval fue desapareciendo en un gran número de ciudades, por lo que poco a poco fue desarrollándose un estado de opinión entre algunos sectores de intelectuales sobre la necesidad de conservación. Los Informes de la Real Academia de San Fernando se convierten en preceptivos a la hora de realizar los proyectos de ensanches de las poblaciones, de acuerdo con lo preceptuado en el art.29 de la ley de 26 de julio de 1892 y 63 del Reglamento de 31 de mayo de 1893 para su ejecución, como medida tuteladora de policía urbana sobre el ámbito del ornato que habían ido configurándose desde la etapa borbónica. Sin duda alguna su papel se convertiría en vinculante en las sucesivas ampliaciones que se iban efectuando en torno a las ciudades españolas de principio del siglo XX. Se fue generando para ello un procedimiento administrativo en la que la Corporación Municipal presentaría un proyecto de reforma y ampliación del ensanche, que sería estudiada por la propia Real Academia de San Fernando, redactando un informe donde se resolvía el expediente presentado. En el caso de Barcelona se fueron promulgando una serie de disposiciones legales como fueron el Real decreto de 24 de mayo de 1910 fijando los términos del 9 de febrero de 1904 que aprobó las modificaciones introducidas por el Ayuntamiento de Barcelona en el plano de ensanche y parte correspondiente a la Gran Vía diagonal o el Real decreto de 24 de marzo de 1916 aprobando la reforma del plano del ensanche de la ciudad condal. Cabe mencionar los informes de la Junta Consultiva de Urbanización y Obras que en algunos casos se hicieron perceptivos a la hora de conservar algunos bienes inmuebles que iban a ser derribado por el ensanche, como fue el caso de su propuesta de conservación de los edificios del Arte Mayor de la Seda y el de la Caja de Pensiones para la vejez, por su valor artístico e histórico que representaba. Cabe mencionar el elogio que le va a dedicar Jerónimo Martorell sobre la urbanización de la ciudad de Gerona,

<sup>2832</sup> El Proyecto de bases para la reglamentación de los Arquitectos al servicio de las Diputaciones y Municipios aprobados por el III Congreso Nacional de Arquitectos en 19 de abril de 1904 se publicó en la revista *La Construcción Moderna*, p.254. Madrid, 15 de septiembre de 1912, Año X, N.17, pp. 254-269. Gaceta de Madrid, 27 de agosto de 1912.

donde se instaba a instancia del Ayuntamiento al equilibrio entre los valores monumentales y la transformación de la ciudad: *El Ayuntamiento de Gerona ocupase en estos últimos tiempos de una cuestión digna de ser mencionada. Ha procurado obtener un progreso en todo aquello que se refiere a la transformación, a la renovación de la parte antigua de la ciudad, a la ordenación de su crecimiento, a su belleza, al aspecto artístico de calles y plazas. En medio de la general indiferencia de los Municipios respecto a estas cosas, las resoluciones de aquel Ayuntamiento, el cuidadoso estudio que ha hecho del asunto, merecen las mayores alabanzas (...) El Ayuntamiento de Gerona ha aprobado, con ligeras enmiendas, el nuevo trazado de alineaciones propuesto por la Comisión nombrada al efecto. Ya no se destruirá inconscientemente la ciudad; el tránsito por sus antiguos barrios será, con el tiempo, mucho más fácil que lo habría sido con las alineaciones que han sido objeto de enmienda (...)*<sup>2833</sup>.

### **7.3.2. El deber de conservación de los restos arqueológicos de las Corporaciones Municipales en la construcción de plazas y mercados.**

Uno de los problemas generado por las transformaciones de los tejidos urbanos de interés histórico y artístico serían los continuos descubrimientos de restos arqueológicos que iban saliendo a la luz, por lo que las Corporaciones Municipales tenían que solucionar si era posible continuar las obras públicas que se estaban realizando, respetando al mismo tiempo aquellos vestigios del pasado que se habían descubiertos o simplemente suplir el problema obviando los restos encontrados, ya que el descubrimiento de los mismos podían perjudicar el desarrollo económico del municipio, paralizando las obras de una plaza o mercado, por lo que una vez se contraponían los intereses de la modernidad con los valores monumentales. En algunas ocasiones se intentaron llegar a una solución equilibrada, como ocurrió en Tarragona con la construcción de una plaza pública. Al procederse al derribo de varias casas adquiridas por el Ayuntamiento de Tarragona, en la parte alta de la población, y en la manzana comprendida entre las calles de Santa Teresa, Trascarnicerías y Mercería y la prolongación de Santa Ana, con el objeto de construir una plaza-mercado, se descubrieron restos de construcciones romanas, motivo por el cual la Comisión Provincial de Monumentos, en 17 de mayo de 1919, pidió a la Superioridad en resonado informe, que fueran conservados aquellos restos, al considerar que constituían el límite norte del Foro de la antigua ciudad. Por este motivo, la Dirección General de Bellas Artes, además de ordenar telegráficamente la suspensión de las obras, dispuso que informase sobre el particular el arquitecto del Ministerio, Ramón Salas, el cual con el dictamen correspondiente acompañado de un plano, preciso la situación del Foro Romano de Tarragona, reconociendo como restos del mismo los descubiertos con ocasión de los mencionados derribos e indicando la necesidad de conservarlos. Unos días después, el 25 de junio de 1919, el Ayuntamiento de Tarragona elevó al Ministerio una instancia expresando que los restos de

---

<sup>2833</sup> MARTORELL, Jerónimo “La urbanización en Gerona”, *Arquitectura*, Año V, Madrid, febrero de 1923, p.29.

referencia en manera alguna podían quedar en el sitio que ocupan y proponiendo que, al ser derribado el muro descubierto, la Corporación Municipal quedaba obligada a marcar en el suelo de la plaza o en el pavimento del mercado, de una manera visible, las trazas de las mismas, o con una inscripción que indique las circunstancias especiales de la expresada construcción romana. El asunto pasaría a la Real Academia de la Historia, que propuso que se practicaran excavaciones en el sitio donde el muro había sido descubierto, a fin de que, examinado otros restos que pudieran haber ocultos, se formase cabal juicio de la importancia de tales construcciones y, en su caso, de la necesidad de su conservación. Para practicar estas excavaciones sería nombrado Angel del Arco y Molinero, Presidente de la Comisión de Monumentos de Tarragona y Director del Museo Arqueológico provincial, que acabaría el 10 de septiembre de 1921 y entregó a la Junta la correspondiente memoria, con planos y fotografías, habiendo descubierto a uno y a otro lado del muro varios fragmentos arquitectónicos de mármol, como asimismo restos diversos de construcciones posteriores; afirmando dicho Sr. del Arco, en la Memoria que redactó acompañado de plantas, secciones y fotografías, que por los restos descubiertos, queda puntualizada la situación topográfica del Foro Romano de Tarragona, constituyendo ellos, por consiguiente, un dato del mayor interés para la reconstrucción gráfica del citado Monumento.

Finalmente, sería promulgado la Real orden de 21 de septiembre de 1922 por la que se dispondría 1º) Que fuera respetado y conservado el trozo mejor del muro de diez hiladas descubiertos al practicar los derribos ordenados por el Ayuntamiento de Tarragona y que de los restantes, o por el largo intermedio de dos hileras, y el trozo occidental de seis, desfigurado, solamente se destruya, al ejecutarse las proyectadas obras, la parte necesaria hasta que el resto del muro quede en los rasantes de plaza y mercado, para que se conserve siempre bajo tierra los demás y 2º) Que el Ayuntamiento de Tarragona, conforme a lo que en su instancia de 25 de junio de 1919, deje señalado en el pavimento de plaza y mercado, de un modo preciso y permanente, mediante una faja longitudinal, desde el trozo del muro (...) la situación de la fábrica romana descubierta, para que siempre pueda ser conocido su trazo. Cabe mencionar que en el Informe que redactaría el gran académico de la Historia Arturo Mérida el 30 de enero de 1920 habría propuesto tres posibilidades de actuación: 1º. Que fuera conservado el muro y los otros restos y en consecuencia indemnizado el Municipio por el Estado; 2º) Que de no parecer monumento lo acabado, y de no serlo tampoco la conservación total de restos y muros procure la del trozo mayor, compuesto de diez hiladas, a que se refiere el Sr. Salas, por ser el que mejor representa la destruida construcción y 3º) Que si tampoco se hallaren términos hábiles para conseguir lo últimamente propuesto y fuese forzoso autorizar la demolición del muro y restos se obligue al Municipio a señalarlos, como propone, en el pavimento de plaza y mercado de un modo preciso y permanente para que siempre pueda ser conocida la traza

de las indicadas construcciones y utilizada como dato para la reconstitución de la antigua topografía de la famosa ciudad. Asimismo Mérida apostaba por una solución equilibrada de respeto de las antigüedades con las nuevas necesidades que se iban imponiendo en el mundo moderno: *Tales son los elementos de juicio de este desdichado caso, que no es nuevo sino reproducción de la eterna contienda entre lo nuevo o viejo, entre las reliquias del pasado y los arrolladores avances de la vida moderna. El caso pudiera, sin embargo, resolverse en términos de concordia. El muro en cuestión, según el dictamen del Sr. Salas, es por su labor y su despiezo, y por estar aparejado en seco, obra perfecta romana; pero es evidente que se halla casi destruido, que carece de molduras o adornos y que no es más que parte de una construcción cuya traza total se desconoce. Partidarios por nuestra parte, como la Comisión de Monumentos cuantos amamos la Historia y el Arte, de que no se destruyan los restos antiguos, entendemos sin embargo que en casos como el presente tal vez ese despedazado muro no represente el valor que suponga su conservación, desde el punto de vista que nos importa, que es el arqueológico; el muro antedicho y los otros restos aislados, según hoy se encuentran, ser considerados como un monumento en sí estimable, constituye más bien un documento para conocer o deducir la situación del Foro, si realmente a él pertenecieron.*

### **7.3.3. El deber de conservación de la muralla y puertas medievales: La conciliación entre los valores monumentales y los intereses municipales de modernización urbana.**

Como había ocurrido en otros países europeos, en el ámbito español el derribo de la muralla se convierte en uno de los objetivos de todo plan modernizador urbanístico, al ser considerado como obstáculo de expansión de las ciudades. Nuevamente los intereses municipales, que en sí mismo subyugaban los de un amplio número de particulares, irían a primar sobre los valores monumentales, por lo que durante esta etapa se fue incrementando el derribo de las murallas de un gran número de urbes españolas. En 1902 el arquitecto Torres Balbas criticaría la actitud de los Ayuntamientos sobre la demolición de las cercas de murallas de los pueblos y ciudades: *Estas murallas de nuestras villas no caen de vejez ni las arruinan los temporales: derribanlas los Municipios como cosas viejas, inservibles y molestas (...) Estos restos de fortificación habían ido quedando olvidados, eran como despojos que una marea viva deja en los límites de la playa y que luego el mar no vuelve a recoger. Hoy parecen demasiado molestos, lo mismo en las villas muertas que en aquellas otras florecientes, en pleno crecimiento. Van derribándose las antiguas cercas de bellas piedras amarillentas; se derrocan y allanan las torres por voluntad unánime de los pueblos que la poseen. No faltan pretexto para la destrucción: necesidades de higiene, de urbanización, o el supuesto estado de ruina en que se encuentran, aunque luego tengan que volarlas con dinamita para hacerlas desaparecer (...) En nuestra tierra soñolienta la piqueta municipal no descansa desde hace bastantes años. No la mueven intereses ciudadanos, necesidades de urbanización, crecimiento o imposiciones higiénicas, grotescamente evocadas para ello con frecuencia en muchos de estos pueblos, sin conducción de agua ni alcantarillado. Suelen manejarse bastardos intereses políticos y particulares (...) Pregonase que las murallas se oponen al crecimiento de las ciudades que cercan y las puertas detienen la circulación. Aunque las aglomeraciones*

*urbanas crezcan, pueden abrirse en el muro los pasos necesarios a la urbanización moderna, dando salida a calles que de ella carezcan, sin necesidad de derribar las puertas, magníficos elementos de decoración monumental, y los lienzos del muro pueden proteger gratos paseos, resguardados y tranquilos*<sup>2834</sup>. El Estado por consiguiente autorizaría el derribo de las murallas a los Ayuntamientos, primando los intereses públicos locales de higiene y modernización sobre los valores monumentales. En el **Proyecto de ley de 25 de noviembre de 1914** sería autorizada la demolición de las murallas de la ciudad de Jaca, que el Ayuntamiento de Jaca había solicitado, para ensanche y embellecimiento de la urbe. Se consideraba en el proyecto que *el recinto de amurallado de la ciudad de Jaca, de antigüedad remontísima, no tiene en la actualidad valor militar alguno. Su desaparición contribuirá al ensanche y embellecimiento de la población, con lo que esa propiedad del Estado, hoy improductiva, adquiriría un valor realizable, con aplicación a cuartelamientos u otras obras de defensa en dicha región*, por lo que se autorizaría al Ayuntamiento de Jaca para que procediera a la demolición de las murallas de dicha ciudad, debiéndolo efectuar por cuenta del Municipio, a favor del cual quedará el aprovechamiento de los materiales (art.1º); El terreno que ocupara las murallas y el correspondiente a los caminos de ronda exterior e interior, después de deslindado y tasado, serían enajenados en pública subasta con la concesión del derecho de tanteo a los poseedores de las fincas colindantes (art.2), exceptuándose de esta enajenación los terrenos necesarios para vías públicas que quedarán de propiedad del Municipio (art.3º). En los mismos términos se autorizarían a un gran número de Corporaciones Municipales los derribos de las murallas de sus localidades. En algunos casos, los Ayuntamientos se comprometía a conservar los bienes muebles de interés histórico y artístico, como se puede apreciar en algunas disposiciones legales de esta etapa como la Ley de 11 de julio de 1912, por la que se autorizaba al Ayuntamiento de Pamplona para que por su cuenta, y con las condiciones que se exprese fuese efectuado el derribo de las murallas de la plaza en el frente Sureste (art.1º), quedando en propiedad del Ayuntamiento todos los materiales que existen en los terrenos cedidos, fosos, murallas y anexos, como piedras, ladrillos, hierros y demás materiales, precisándose que los escudos, lápidas, tallados, inscripciones y todos los objetos que puedan tener un valor histórico militar, arqueológico o artístico, se custodiarán como de interés nacional en el Parque de Artillería (art.2). En la misma línea sería promulgada la **Ley de 7 de enero de 1915** por el que se autoriza al Ayuntamiento de Pamplona el derribo de las murallas, conservando los restos artísticos.

Ante esta situación se emprendió desde algunos sectores eruditos que iban desde círculos minoritarios hasta las propias Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, una actividad de defensa de los

<sup>2834</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo “Las murallas que caen”, *Arquitectura*, Año IV, 1922, pp.72-75.



baluartes defensivos de las ciudades, admitiendo en algunos casos que aunque podían ser focos insalubres, debían de ser salvaguardados. Serían las Reales Academias las encargadas de analizar los informes que enviaban los Ayuntamientos sobre la demolición de las murallas de su propia localidad. Una práctica que se fue imponiendo fue la aceptación por parte de la propia Real Academia del derribo de aquel trozo de muralla que no se consideraba digno de conservarse, a cambio de comprometer al propio Ayuntamiento de mantener aquel sector que había salvaguardado de la piqueta. En el **Informe de 19 de noviembre de 1909 de la Real Academia de San Fernando** sobre el derribo de las murallas de Alcudia queda reflejado el proceso de deterioro del recinto fortificado y la solución que finalmente se aplicaría de derribo y conservación de distintos trozos del mismo. Se precisaba el importante conjunto que había representado las murallas de la localidad: *Fueron las fortificaciones de Alcudia ejemplar notable de la Arquitectura Militar del siglo XIV (...) Formaba todo su recinto un conjunto armónico y pintoresco, embellecido por suntuosas puertas de singular medio arquitectónico; pero desde hace tiempo comenzó la ruina de tan venerandas defensas, siendo este motivo de reclamaciones por parte de prestigiosas personalidades amantes de recuerdos históricos (...) Han pasado veinte años desde entonces, y en éstos han continuado tan en aumento los deterioros en todo el recinto, que á seguir así pronto desaparecerá hasta en sus trozos más artísticos y monumentales, siendo ya hoy imposible levantar lo derruido. Se solicitaría por parte de la Academia que fuese respetado una parte del conjunto, para lo que se comprometiera a costear su restauración, aceptando al mismo tiempo que fuese derribado aquel sector que pudiera impedir la modernización de la ciudad: En tal estado el asunto llega hoy la solicitud de aquel Ayuntamiento, redactada, en verdad, en términos tales de concordia y consideración y respeto a los mayores méritos de aquella construcción, que no puede menos de reconocerse el espíritu de concordia entre contrarios intereses que en ella predomina. Por ello propone el derribo del doble recinto fortificado á excepción de la Puerta de la Xara, San Sebastián y el terraplenado donde está emplazado la parroquia, cuyas edificaciones (dice), dignas de toda consideración y respeto como monumentos históricos y artísticos deberán restaurarse y conservarse, haciendo cesar el abandono en que se encuentran actualmente por falta de fondos de la entidad á cuyo cuidado se hallan. El Ayuntamiento, por su parte, se compromete á costear la restauración y conservación de lo que haya de quedar en pie, por lo que bien puede aceptarse lo propuesto por el Ayuntamiento de Alcudia, siempre que proceda de acuerdo con aquella Comisión de Monumentos, para que así se salven de ruina inminente los restos de más sobresaliente valor artístico de aquellas históricas murallas. Porque las puertas consignadas, son de tal belleza e interés, que bien pueden considerarse como ejemplares únicos en su género, por lo que toda restauración o conservación de ellas debe ser intervenida por la Comisión de Monumentos y personas de reconocida competencia artística y arqueológica para que no sufran deméritos irremediabiles<sup>2835</sup>.*

---

<sup>2835</sup> Academia. Boletín de la Academia de San Fernando, Segunda Época, Madrid, 30 de junio de 1909, Año III, Núm.10, pp.169-171; VIVES, Antonio Las murallas de Alcudia, Boletín de la Real Academia de la Historia, T.LX, abril de 1912, p.1.

En algunas ocasiones no se pudo impedir por parte de la Real Academia de Bellas Artes su demolición, como fue el caso del Alcazaba malagueño. La ciudad de Málaga experimentaría una amplia transformación a lo largo de todo el siglo XIX, que afectaría ampliamente a la estructura islámica que había heredado desde la época medieval<sup>2836</sup>. El Alcazaba sería probablemente el edificio más afectado en el nuevo planeamiento urbanístico. Morales Folguera puntualiza cómo el inmueble había perdido su utilidad militar, convirtiéndose en una zona de insalubridad y hacinamiento, por lo que se planteó desde múltiples sectores de la sociedad malagueña la demolición de la construcción islámica para sanear el sector y así unir la parte norte de la ciudad con el puerto<sup>2837</sup>. El arquitecto M. Rivera Martín presentó un proyecto de explanación y urbanización de la Alcazaba de Málaga en que se planteaba su desmonte alegando el consabido ornato público: *Bajo el punto de vista del ornato público, el estado actual de la Alcazaba no puede ser más deficiente (...) reducida hoy a derruidas murallas y agrietados torreones tan inútil para la defensa, como peligroso para su estado de ruina... Todavía debiera meditar su demolición si para el historiador o para el arqueólogo ofreciera algo digno de estudio; (...) hemos buscado en la Alcazaba con solícito empeño cuanto pudiera dar ideas de las artes y de las industrias de los pueblos que gobernaron nuestro suelo; pero sus monumentos, si los tuvo, cayeron a los golpes de la piqueta del vencedor o a la acción destructora de los tiempos: tan solo algún capitel y trozos de columnas formando parte de otra fábrica nos recuerdan los días de la decadencia romana. Sin embargo, no se hizo realidad tal proyecto, optándose en 1904 por el desmonte del sector meridional y el derribo de las murallas del sector llamado Haza baja de la Alcazaba, formando parte del proyecto de ampliación del Parque, y utilizándose los materiales para los rellenos de la construcción del nuevo puerto. Con la desaparición de este sector de la muralla, comenzó una verdadera rapiña de los objetos arqueológicos que fueron saliendo a la luz, criticado por Rodríguez Berlanga: *En este segundo periodo de los derribos de la muralla de mar de la Alcazaba, la turba de anticuarios improvisados, que como granizada asoladora de vendaval inesperado, había caído de pronto sobre aquellos desmontes, se vio, a lo que parece, forzada a retirarse a la desbandada, no atreviéndose a luchar contra la respectiva invasión de los ropavejeros, que también con el mismo título de anticuarios, se dedicaron, con no extraña asiduidad, a acaparar, exportar, negociar y explotar a los atacados de la monomanía arqueológica contemplativa, sufren las consecuencias naturales de esta aguda enfermedad endémica. El historiador Navarro también recoge el expolio de las antigüedades malagueña a raíz del derribo de la muralla del Alcázar: *Al hacerse el derribo de las antiguas murallas de la Alcazaba, que daban vista al mar, se han encontrado en el movimiento de la tierra sobre que estos muros se sostenían una multitud de objetos y varias inscripciones, todo lo cual debido a la incultura de los***

<sup>2836</sup> MORALES FOLGUERA, J.M. *Málaga en el siglo XIX. Estudios sobre su paisaje urbano*. Departamento de Historia del Arte, Málaga, 1982.

<sup>2837</sup> MORALES FOLGUERA, J.M. "La Alcazaba de Málaga en el siglo XIX. Entre la utopía y la realidad". *Cuaderno de Arte de la Universidad de Granada*, XVI, pp.427-445.

*ediles que tal obra ordenaron, han desaparecido entre unos y otros, especuladores, aficionados y antojadizos (...)*<sup>2838</sup>.

El destino de las murallas de Sevilla, que culminaría con su destrucción, se convierte en un ejemplo significativo de la inercia de las autoridades académicas a la hora de tutelar el Patrimonio Monumental. El derribo había comenzado en el año , quedando solamente en pie el trozo de muralla que iba desde la Puerta de Córdoba a la de la Macarena. En un primer Informe, del 22 de enero de 1907<sup>2839</sup>, redactado por el académico Angel Aviles, se resaltaba los valores monumentales de las murallas almohades hispalenses, poniendo en tela de juicio los fundamentos que defendía la propia Corporación Municipal para su derribo, e incluso denunciando unos supuestos intereses privados especulativos: *está a punto de ser derruido por ficticias necesidades de ensanche y hasta por mezquinos cálculos de escasos aumentos en el presupuesto municipal, que podrían obtenerse mediante la enajenación de las parcelas llamadas de Capuchinos, sitas al pie de la muralla. Háseles ocurrido esto á algunos ediles sevillanos, olvidando que el Municipio contrajo con la Comisión Provincial de Monumentos solemne compromiso de exceptuar de la ya entonces comprendida demolición, el trozo de muralla desde las Puertas de Córdoba á la de la Macarena, cuidando la ciudad de preservarlo de todo linaje de injurias (...)* Para ello propone la Comisión que sean declaradas Monumento Nacional, única manera de garantizar su conservación (...). El 26 de marzo de 1907, el Alcalde de Sevilla, dirigió una comunicación a la Comisión Provincial de Sevilla, manifestando que, *preocupándose el Ayuntamiento que presidia atender a la higiene y salubridad del populoso barrio de San Julián y de facilitar las comunicaciones del mismo por la Ronda, y considerando asimismo un deber la conservación del referido trozo de murallas, por constituir el único trozo salvado de las construcciones militares romanas, estimaba que hay términos hábiles para que puedan convivir ambas aspiraciones, abriendo tan sólo, en dicha muralla, portillos que comuniquen aquella parte de la ciudad con la Ronda, conforme lo demandan la higiene y la urbanización.* La Real Academia pediría Informe a la citada Comisión de Monumentos en 4 de abril de 1907 sobre las condiciones en que para higienizar el barrio de San Julián podían abrirse vías de comunicación sin detrimento de tan hermoso ejemplar arquitectónico, y la referida Corporación provincial, en cumplimiento de los deseos de la Academia, transmitió el 12 de junio de 1908 la comunicación dirigida por aquel Ayuntamiento al señor Gobernador civil de la provincia, acompañada del plano del repetido trozo de muralla, en el que señalaba de lápiz los puntos en que deben romperse las murallas para dar salida á las calles de Fray Diego de Cádiz, Aniceto Sáenz y Patricio Sáenz de Torreblanca. Unos meses después por Real Orden de 11 de enero de 1908 sería declarada Monumento Nacional.

---

<sup>2838</sup> NAVARRO, E.J. "Pesas romano-malacitanas" en *Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales*, 9. Vol. 1 pp.65-67.

<sup>2839</sup> Academia. *Boletín de la Academia de San Fernando*, Segunda Época, Madrid, 31 de marzo de 1908, Año II, Núm.5º, pp.27-29

Con los mismos términos de equilibrio entre valores monumentales y modernización de la ciudad se reflejaban en el Informe de 9 de noviembre de 1909<sup>2840</sup>, siendo ponente el académico Adolfo Fernández Casanova, podemos apreciar el cambio de actitud de la misma Academia, donde se defendía el equilibrio entre los intereses artísticos y los cambios de modernidad urbanístico que requería el sector, fundamentalmente de carácter higiénicos. Anteriormente, como citaba el propio académico la propia Comisión de Monumentos de Sevilla había defendido la necesidad de transformar dicho sector urbanístico, alegando las carencias del barrio de San Julián, especialmente *por las necesidades de la vida, cada día mayores en Sevilla, sobre todo las clases trabajadoras, y las exigencias de la salubridad e higiene que se imponen al deseo de conservar incólumes los monumentales restos de las murallas*, así como *de facilitar las comunicaciones del mismo por la Ronda*, aunque añadía la propia institución local que *podía conciliarse las conveniencias del barrio con las del arte y de la Arqueología*. En los mismos términos Casanova defendería la integridad de los restos de la cerca almohade, en la que se pretendía *abrir los portillos para aquella zona de población, hoy completamente cercada y rodeada del ancho y sucio camino de Ronda que separa las edificaciones y el amurallado recinto*. Esta Academia cumple, pues, un sensible deber al elevar á V.E. la propuesta de la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla, por estimar que no deben desnaturalizarse los venerados monumentos arquitectónicos con obras que ataquen a su integridad; pero comprendiendo que las necesidades de la vitalidad y de crecimiento de la población exigen que no se encierren los poblados en infranqueables límites y más aún, que uno de los primordiales deberes de la administración pública es atender á la salubridad é higiene de los pueblos, juzga preciso conceder la autorización solicitada por el Ayuntamiento de Sevilla, pero en los términos puramente indispensables para satisfacer á tan superiores exigencias y con la garantía de que ha de conservarse la obra subsistente en el decoroso estado que exige su importancia monumental, lo que hoy no se verifica; pues no sólo se ha construido al pie de las murallas un gran basurero, que por el buen nombre de Sevilla debe inmediatamente desaparecer, sino que hasta se permite á las gentes incultas abrir boquetes y subir al adarve y convertirlo en depósito de inmundicias, con lo que resulta incumplida la Real orden declarando la obra monumental nacional, á pesar de las repetidas gestiones oficiales y particulares de la Comisión para impedir tales desmanes. El Informe acababa subrayando nuevamente que en el monumento a conservar *podía conciliarse, hasta donde es posible, las ineludibles exigencias físicas de la higiene y viabilidad con las no menos respetables de orden moral inherentes á la conservación de tan venerado monumento histórico*, por lo que la Academia defendía que podía accederse á lo solicitado por el Ayuntamiento de Sevilla de abrir dicho tres portillos en los lienzos de la muralla comprendidos entre las

<sup>2840</sup> Academia. Boletín de la Academia de San Fernando, Segunda Época, Madrid, 30 de junio de 1909, Año III, Núm.10, pp.172-175.

Puertas de Córdoba y de la Macarena, siempre que se cumplan estrictamente por el Ayuntamiento las condiciones que tan acertadamente propone la Comisión Provincial de Monumentos y á las que juzga esta Academia que deberán añadirse las siguientes: 1º) *Las reparaciones de los desperfectos ocasionados en las murallas, deberían efectuarse con análogos materiales é idénticas estructuras á las de las antiguas fábricas;* 2º) *Como el fortificado recinto se compone de los altos lienzos de muralla en que han de abrirse los portillos (...) se imponía la necesidad de que las verjas que se coloquen vuelvan en ángulo hasta intestar en los muros á los costados (...) y 3º) Sobre cada portillo se habría de colocar una lápida de mármol o piedra dura con inscripción en que se consigne la fecha en que se abra.*

El derribo de los Caños de Carmona despertó una amplia polémica entre las distintas instituciones encargadas de la protección del patrimonio histórico-artístico de Sevilla. Sería el Ayuntamiento de Sevilla el que adoptaría la medida de la demolición, encontrándose su apoyo en la Comisión de Monumentos, con la consiguiente oposición de la Real Academia de la Historia. Los Caños de Carmona<sup>2841</sup>. La Real Academia de la Historia se enfrentaría con la medida, por lo que nombraría una Comisión especial, el 5 de mayo de 1911. La visita de la Comisión de la Academia al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes dio un resultado favorable, al suspenderse las obras de derribo por el propio Gimeno, hasta estudiar el Informe que iba a ser remitido por la Comisión de Monumentos de Sevilla. La suspensión del derribo de los Caños de Carmona por el Ministerio de Instrucción Pública supuso una reacción enérgica por parte de la Corporación Municipal hispalense, como está recogida en las páginas del ABC: *El gobernador civil recibió hoy un telegrama del ministro de Gobernación ordenándole la suspensión de los trabajos de demolición del acueducto romano de los Caños de Carmona, y al mismo tiempo, interesándole la formación de un expediente para que sea declarado Monumento Nacional dicho acueducto. Trasladado el telegrama al alcalde, produjo en el Ayuntamiento el efecto de una bomba. Los concejales que se hallaban presentes protestaron indignados de esa orden, que tiende a limitar el desenvolvimiento de la población. El Sr. Rodríguez de la Borbolla, después de conferenciar con el alcalde, ha telegrafiado al ministro manifestándole que está mal informado y que suspenda todo juicio hasta oír a la Comisión que al efecto irá a Madrid brevemente*<sup>2842</sup>. El mismo día 5 de mayo de 1909 el Conde de Romanones, Presidente de la Real Academia de San Fernando mandaría un oficio a la de la Real Academia de la Historia, presidida por Marcelino Menéndez Pelayo, en la que se comunicaba su apoyo institucional acerca de las gestiones que se estaban haciendo ante las instancias públicas para que fuera paralizada la demolición del inmueble. La Academia de la Historia enviaría una nueva instancia al Ministerio el 10 de mayo de 1911 para que enviase un alto funcionario para que estudiase sobre el terreno el estado de la cuestión e incoase expediente para su declaración como

---

<sup>2841</sup> JIMENEZ MARTIN, Alfonso “Los Caños de Carmona. Documentos olvidados”. *Historia, Instituciones, Documentos*, Nº2, 1975, pp.317-328.

<sup>2842</sup> ABC, 7 de mayo de 1911, p.5.



Monumento Nacional: *Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esta Real Academia en su sesión del 9 de corriente, ha quedado enterada con verdadera satisfacción de la favorable acogida que V.E. tuvo la bondad de dispensar a la Comisión de su seno que, por encargo de la misma, tuvo el honor de visitarla para protestar de la proyectada demolición del acueducto romano conocido con el nombre de Caños de Carmona en Sevilla, y también ha sabido con una complacencia que V.E. según era de esperar de su reconocida cultura e ilustración dio desde luego orden telegráfico de suspender toda obra de reforma o derribo en el referido acueducto sin perjuicio de enviar a un alto funcionario de este Ministerio para que estudie la cuestión sobre el terreno y de incoar el expediente para la Declaración de Monumento Nacional, si a ello hubiera lugar.*

En contraposición, el día 15 de mayo de 1911 sería enviado un oficio de remisión firmado por José Gestoso, en la que informaba que la Junta de la Comisión de Monumentos de Sevilla había acordado el 9 de mayo de 1911 la necesidad del derribo del acueducto romano, alegándose especialmente circunstancias sanitarias: *Reunida la Comisión de Monumentos en el despacho del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia y bajo la presidencia del mismo, asistiendo el Inspector General de Monumentos y los Sres. Don José Gestoso, Vicepresidente de la Comisión, Don Manuel, Presidente de la Excma. Diputación Provincial, D. Antonio Habrón, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento, Don Francisco Pagés, Rector de la Universidad (...) El Sr. Inspector hace presente que el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública había puesto el telegrama del día siete a instancia de una Comisión de individuos de la Real Academia de la Historia que le había hecho presente que en Sevilla se estaba llevando a cabo la demolición de un acueducto romano, que era digno de ser conservado y pedían al Sr. Ministro que suspendiese la demolición. El Sr. Gestoso da las gracias al Sr. Gobernador y al Sr. Inspector por los buenos deseos que respecto de Sevilla y sus monumentos (...) Basta lo expuesto para demostrar que el edificio de que se trata, carece de los exquisitos y cualidades que una juiciosa crítica exige para estimarlo como obra arquitectónica monumental. Ahora bien, estima, el que inscribe que son de tal índole e importancia las exigencias del interés público que reclaman la destrucción del acueducto, que en este caso ni pueden ni deben posponerse a un exguado espíritu conservador, que si es loable en la mayoría de los casos es inadmisibile en el presente, pues solo se fundamenta con una tradición de antigüedad, de no en verdadero mérito. Ni todo lo antiguo por el solo hecho de serlo entraña importancia e interés para la historia, para la arqueología, y para el arte, ni puede sostenerse el criterio de anteponer a verdaderas necesidades de higienes y a exigencias justas y razonables de urbanización el abolengo más o menos remoto de vulgares construcciones. Las aguas que conduce el acueducto recorren al descubierto la longitud ya citada de mil seiscientos treinta y seis metros, recogiendo en su camino no pocas materias nocivas para la salud dándose frecuentemente el caso, durante los meses de estío, de haber sorprendido a gentes del campo que se sirven como baño, que imperiosamente demandan el enturbamiento de las aguas. Además, dadas las líneas de construcción de viviendas, que cada vez van prolongándose más y más (...) la permanencia del acueducto, al impedir en absoluta tan apetecida y necesaria expansión lleva consigo la mayor impopularidad, circunstancia muy digna de ser atendida teniendo en cuenta (...), puesto que todo cuanto sea prestigios y simpatías por defender dudosos intereses*

*artísticos o arqueológicos serían (...) muy dudosa para el mañana. Estas consideraciones, sin duda hubieron de tenerse en cuenta el año mil ochocientos ochenta y nueve en el cual fue derribado el primer trozo de este mismo acueducto, sin protestas de nadie y con el asentamiento de todos, no obstante que la longitud considerable de ciento veinte y dos metros pudo dar lugar a que hubiesen sido formuladas. En resumen; estima el que se suscribe que en atención a lo expuesto debe permitirse al Excmo. Ayuntamiento el derribo del acueducto, obligándose a conservar como recuerdo del antiguo sistema de conducciones de aguas un trozo del mismo del número de metros que de común acuerdo sea determinado por Excmo. Corporación y por esta Comisión de Monumentos. Sevilla, ocho de mayo de mil novecientos once. José Gestoso(...).* En el Informe de la Comisión de Monumentos de Sevilla **de 5 de mayo de 1911** se fundamentaba las causas de su derribo, y es mas de su lectura se desprende como se iba introduciendo incluso entre los sectores eruditos la conveniencia de superponer los intereses modernizadores de la ciudad sobre los valores monumentales que pudieran representar un inmueble: (...) *en cuya construcción el ojo más perspicaz no descubre ni el más insignificante rasgo artístico, ni de interés arqueológico, ni en su conjunto ni en sus pormenores, pues no pasa de ser obra vulgar y corriente de albañilería de los antiguos tiempos. Si en remotas épocas los tuvo no queda memoria de ella en los historiadores, ni vestigios en la actualidad fábrica (...) estimo el que suscribe, que son de tal índole e importancia las exigencias de interés público que reclaman la destrucción del acueducto, que en este caso ni pueden ni deben proponerse a un espíritu conservador, que si es loable en la mayoría de los casos, es inadmisibile en el presente, pues solo se fundamenta en una tradición de antigüedad, no en verdadero mérito. Ni todo lo antiguo por el solo hecho de serlo empaña importancia para la historia, para la arqueología y para el arte, ni puede sostenerse el criterio de anteponer a verdaderas necesidades de higiene y a exigencias justas y razonables de urbanización al abolengo más o menos remoto de vulgares construcciones.* En el Informe de la Real Academia de la Historia de 23 de mayo de 1911 de la Comisión que habría sido nombrada para dictaminar sobre el acueducto hispalense, firmado por Fidel Fita y Colomer y José Ramón Mélida nuevamente insistiría en la necesidad de ser conservado el inmueble. El Informe sería publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1911<sup>2843</sup>. Los Caños de Carmona quedarían derribados en el año 1912.

#### **7.3.4. La desautorización de la demolición de bienes de interés histórico-artísticos.**

Durante esta etapa se fue resolviendo la suspensión de los derribos de algunos bienes inmuebles por parte del Ministerio de Instrucción Pública, a instancia de las Comisiones de Monumentos y las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, que habían sido acordadas por las Corporaciones Municipales. El derribo del arco de los Pilares de Oviedo puede ser un ejemplo significativo del incumplimiento que adoptaron muchas

---

<sup>2843</sup>FITA COLOME, Fidel “El antiguo acueducto hispalense conocido con el nombre de los Caños de Carmona”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, V. LVIII, 1911, pp.518-522.

Corporaciones Municipales sobre la conservación de edificios históricos y artísticos, a pesar de haber sido el acuerdo revocado por parte del Ministerio<sup>2844</sup>. El 28 de noviembre de 1905 la Comisión de Monumentos de Oviedo enviaría la siguiente instancia al Cabildo Municipal: *En sesión celebrada en el día de ayer se ha enterado esta Comisión del acuerdo de V.E., fecha del 24 del corriente, aprobando un expediente relativo a la demolición del antiguo acueducto de los Pilares de esta capital. Como se trata de un monumento histórico, digno de aprecio, de significación especial para el estudio de la edificación en pasados tiempos, y como el viejo acueducto es una construcción típica de esta ciudad (...) que puede demostrar la no necesidad del derribo (sin prescindir de ventajas más o menos ciertas que se aducen) (...) Numerosa legislación, que conoce bien V.E. y muy especialmente el Decreto del Gobierno de la República de 16 de diciembre de 1873 se oponen a acuerdos como el que ha tomado V.E. para demoler los Arcos de los Pilares sin el expediente y trámites que con propósito semejante deben ser cumplidos, y mientras esto no suceda, tal acuerdo no debe llevarse a cabo, para cuyo efecto y en cumplimiento de las disposiciones legales, tengo el honor de dirigirme a V.E. a fin de que, revocando o reformando dicho acuerdo, disponga como procede por las anteriores consideraciones.* Dicha comunicación sería trasladada al Gobernador Civil de la Provincia y a las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia y puesta en conocimiento del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El ayuntamiento de Oviedo tuvo que desestimar su pretensión de derribo del acueducto en este año, a raíz de la promulgación de la Real orden de 24 de marzo de 1906, fundamentada en el hecho de que teniendo en cuenta que *la Comisión Provincial de Monumentos protestó contra la citada resolución y que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, manifiesta que se trata de un monumento de gran importancia y digno de conservarse, cumplidas por tanto, las prescripciones del decreto de 16 de diciembre de 1873.* Sin embargo en 1910, la Corporación Municipal volvería a intentarlo, por lo que nuevamente Fermín Canella interpondría un recurso de alzada al Ayuntamiento de Oviedo, por el que hacía constar al Ayuntamiento la obligación de conservar al bien, y de atenerse a la legislación que estaba vigente en la materia, *pues tanto le imponen el Decreto de Gobierno de la República de 16 de diciembre de 1873 y disposiciones contenidas en el Real decreto de 30 de diciembre de 1881. Son preceptos terminantes; van encaminados a la conservación de monumentos y construcciones que atestigüen el brillo y la prosperidad del arte en época anterior o recuerdan sucesos de historia general o local, para cuyo estudio sirven de fuentes de estudios esenciales y a veces únicas (...) Por olvido o incumplimientos de aquellas y otras leyes, que se dictaron preceptos a fin de contener la decadencia del sentimiento histórico y artístico nacional, se pudieron realizar en mal hora derribos y mutilaciones de monumentos o se han perdido y enajenados objetos de gran importancia. Con propósito de evitar tales hechos en la época actual, ante el triste espectáculo de tanta demolición, se vienen recordando aquellos preceptos legales, y el Gobierno ha dispuesto su oposición en algunos casos y en*

<sup>2844</sup>FERNANDEZ LLANEZA, Carlos *Los pilares de Oviedo*, Oviedo, Septem ediciones, Temas Asturianos, 2007.

*otros cortapisa o dificultades (...) la enajenación, demolición o destrucción de monumentos de verdadero mérito o de interés nacional o local cualquiera que sea el pretexto alegado al intentar su ruina, así como dictar reglas y favorecer la reparación de aquellas construcciones de estimación artística, ya propiedad de la provincia o del municipio (...). Suplico a V.E. que procure la más estricta observancia a las Ordenes de 1906 y, en caso contrario, anule el acuerdo del derribo del Arco de los Pilares para que sea estudiado con más detenimiento en todos sus aspectos, por tratarse de una construcción histórica y artística debe entender el Ministro de Instrucción Pública, oído el dictamen de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, a cuyos centros superiores y consultivos en la materia también habrá de participarlo en cumplimiento de las disposiciones legales de 16 de diciembre de 1873, además del recurso de alzada al Sr. Gobernador Civil de la provincia, que como vecino me concede la ley municipal.* Nuevamente el Ayuntamiento de Oviedo desestimó el derribo del acueducto. Sin embargo, en 1915, ya por tercera vez, la Corporación Municipal pretendería proseguir con el asunto, en la que la Comisión de Monumentos en oficio de 23 de enero de 1915 a la Real Academia de la Historia precisaba que *sin aviso y con olvido de las disposiciones legales en la materia, ha comenzado el derribo; pero en cumplimiento de los fines de este instituto; esta Comisión ofició a los Sres. Alcalde y Gobernador Civil sobre la necesidad de suspender la destrucción mientras no se cumpla los trámites del caso e informe V.E. y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que en su día, con aprobación asimismo de la Dirección general de Bellas Artes, pueda la Corporación municipal ovetense acordar o no dicho derribo con toda justificación; siendo también de considerar que si el motivo o pretexto de ahora es el muy respetable de dar trabajo a los obreros, tan necesitados, en otras obras más urgentes y convenientes para el consejo pudieran aquellos ser empleados, con aplauso general y el especial de esta Comisión.* Por su parte, la Real Academia de la Historia propondría el 14 de abril de 1915 al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que impidiera la actuación de la Corporación Municipal: *Aplaude esta Corporación el celo de la Comisión por la conservación de un monumento que con sobrada razón considera de inestimable valor histórico (...)*<sup>2845</sup>. Finalmente el acueducto quedaría demolido casi en su totalidad en enero de 1915, quedando cinco arcos de los cuarenta y uno en que estaba estructurado. Sería el paso del ferrocarril la causa de su demolición<sup>2846</sup>.

En algunas ocasiones para poder solventar el conflicto de competencia y salvaguardar al inmueble era declarada Monumento Nacional, como fue el caso de la histórica Puerta de la Conquista o de Santa Margarita de Palma de Mallorca. De esta manera el Ayuntamiento de Palma de Mallorca había acordado el derribo de la histórica Puerta de Santa Margarita sin la previa consulta a la Comisión de Monumentos de la provincia, que disponía la Real

---

<sup>2845</sup> El informe de la Real Academia de la Historia aparece publicada en Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 66 (junio de 1915), pp.537-540.

<sup>2846</sup> ROCES FELGUEROSO, Carlos "El puerto de El Musel y el Muelle de Gijón, en relación con el desarrollo de los ferrocarriles mineros" en *IV Congreso Historia Ferroviaria*, Málaga 20-22 de septiembre de 2006, p.10.

Orden de 4 de mayo de 1850; por lo que al al tener conocimiento el Ministerio de Instrucción Pública, *se llamó la atención del Gobernador Civil de Palma para que procurase el cumplimiento del decreto de 16 de diciembre de 1873, en virtud del cual dicha Autoridad suspendió el acuerdo del Ayuntamiento*, solicitando a su vez las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando que se declarase Monumento Nacional, disponiéndose a raíz de la Real orden de 28 de julio de 1908, por lo que quedaba bajo la inspección de la Comisión provincial de Monumentos y la tutela del Estado.

#### **7.4. La configuración inicial del tejido urbano como bien de interés histórico y artístico.**

##### **7.4.1. El Proyecto de Ley del senador Quesada Cañaveral, Duque de San Pedro del 17 de octubre de 1910 sobre expropiación forzosa de toda la propiedad contigua a cualquier monumento nacional.**

El senador Quesada Cañaveral, Duque de San Pedro, presentó una proposición de Ley al Senado el 17 de octubre de 1910 sobre expropiación forzosa de todas aquellas propiedades que estuviesen contiguos a un monumento nacional. La medida era claramente limitadora del derecho absoluto del propietario de un inmueble, ya que quedaba sujeta a la ley de expropiación forzosa por utilidad pública, como así preceptúa su único artículo. Cabe tener en cuenta que en estos años se estaba desarrollando un amplio debate urbanístico en la que se quería primar el aislamiento de los monumentos que hubieran sido declarados monumentos nacionales, para que de esta manera ganara una mayor visualidad, considerándose al mismo tiempo que de esta manera así se podía conservar mejor el inmueble digno de protección, como ya había ocurrido en el caso de la catedral de León, frente a las tesis que iban cuajando en torno a las teorías de Giannini en el que consideraba que la protección del inmueble no se reducía al mismo, sino a todo el tejido urbanístico original en que estaba insertado. Al debate urbanístico de carácter estético, se le añadiría la cuestión jurídica centrada en torno al derecho de los propietarios privados de los inmuebles que estaban situados en torno al monumento, ya que hasta que se planteaba hasta que punto podía primar más el interés general, en este caso el valor monumental, frente a los intereses privados de los inquilinos. La proposición de Ley sería estudiada por una Comisión nombrada el 7 de noviembre de 1910, estando formada por el Marqués de Laurencín, Fernández Prida, Salvador, Suárez Inclán, Quiroga Vázquez, García Gómez y Moral<sup>2847</sup>. El dictamen sería presentado el 14 de noviembre de 1910, presentando dos enmiendas al mismo, uno por el senador **Polo y Peyrolón, el 14 de noviembre de 1910, y otro por Elías Tormo, el 16 de noviembre**. En la primera enmienda se pedía que fuese suprimido el término limítrofe, por su ambigüedad semántica, mientras que en la presentada por Tormo se desglosaría el único artículo de la proposición de ley presentada

<sup>2847</sup> Diario de las Cortes. Senado. Sesión, del lunes 7 de noviembre de 1910, p.18.



en dos, en la que se dispondría la expropiación forzosa por utilidad pública de toda propiedad particular que esté dentro o limítrofe de cualquier monumento nacional, con aplicación del artículo 11 de la ley general vigente, para paliar de esta manera cualquier laguna legal que se pudiera producir, incluso la indefensión de los propietarios (art.1.1), siempre previo informe de las Reales Academias siguiendo los artículos 18 y 19 que la propia Ley de Expropiación Forzosa vigente contemplaba (art.1.2). El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes publicaría las disposiciones generales que fueran necesarias para la aplicación de la ley (art.2). El Proyecto de Ley sería remitido al Congreso el 19 de noviembre de 1910, en la que se incluiría la enmienda que había defendido Elías Tormo. Sin embargo, el Proyecto de Ley no terminó cuajando en el Congreso de los Diputados, por lo que habría que esperar a años sucesivos, pero probablemente pudo ser el antecedente legislativo más inmediato a la hora de proteger los inmuebles históricos en su tejido urbano correspondiente, medida que desde el punto de vista urbanístico, no dejaba de ser conflictiva, porque podría suponer la pérdida de los enclaves urbanísticos de interés históricos y artístico, que pronto se iban a convertir en objeto de revisión normativa.

#### **7.4.2. Un inicio de la protección del tejido urbano como bien de interés histórico y artístico en la ciudad de Toledo.**

La potestad de los Municipios a la hora de conceder licencias urbanas a los propietarios privados de los bienes inmuebles de carácter histórico y artístico sería en muchas ocasiones perjudicial a la hora de conservar el Patrimonio Monumental, ya que primaba los intereses privados sobre los valores monumentales que podía tener el propio edificio. En la mayoría de las ciudades, tanto las Comisiones de Monumentos como las Reales Academias denunciaron la pérdida patrimonial de un gran número de centros históricos, por lo que hicieron en innumerables ocasiones llamamientos a los ayuntamientos para que pudieran frenar la destrucción del tejido urbano de carácter histórico. En los documentos del Archivo de la Real Academia de la Historia se conserva un interesante vestigio de la Instancia dirigida al Alcalde de Toledo en la que se solicita en relación a las reformas urbanísticas que se estaban produciendo en la ciudad, que no se concediera licencias de obras en edificios de propiedad particular sin audiencia previa de la Comisión de Monumentos. Ya en la Exposición de Motivos se puede apreciar la denuncia que se hace sobre la pérdida patrimonial que suponía las transformaciones morfológicas que se estaban produciendo en el tejido urbano en aquellos sectores que por sí mismo podían representar interés histórico y artístico: *El afán de modernizarlo todo en poblaciones medievales como la nuestra conduce indefectible a las más deplorables actuación con prejuicio siempre de algún interés digno de respeto, porque siendo Toledo arqueológico relicario donde se guardan las más ricas piezas de nuestras pretéritas grandezas, donde anidan, por decirlo así, las más gloriosas tradiciones de nuestra historia nacional y se encuentran todos los días los más elocuentes testimonios de las vicisitudes del arte patrio, hay que afrontar el*

*camino de las reformas urbanas. Cada piedra evoca aquí un recuerdo, cada edificio, por insignificante que parezca, atesora con amoroso orgullo su leyenda. Se criticaba la acción de los propietarios privados de aquellos inmuebles de interés histórico y artístico que desvirtuaban el carácter original de los mismos: Desgraciadamente no influye todo lo que debiera estas consideraciones en el ánimo de los toledanos. Sirva de ejemplo lo ocurrido recientemente en el Callejón de los Bodegones, el más típico acaso de esta ciudad, donde, al ejecutar ciertas obras de reparación y mal entendido ornato, se han cubierto una gruesa capa de cal los subedizos de la fachada de una de las casas de aquella originalísima vía, de la cual desaparecieron también en más lejanas fechas los azulejos de numeración algebraica, cuyos últimos restos se conservan en nuestros Museos y, para colmo de desdichas, se ha recovocado y pintado la fachada de un color que hace asomar las lágrimas a los ojos. Y repitiéndose con dolorosa frecuencia estas profanaciones por la perversión del gusto y falta de sentido estético, urge que la autoridad local ponga coto a tantos desmanes con prudentes y previsoras medidas, que sean una garantía para los intereses amenazados, como se ha hecho en Córdoba y en otras capitales andaluzas, por el buen nombre de los habitantes de esta población y por interés propio, pues el día que solo podamos ofrecer a la curiosidad del turista calles tiradas a cordel y viviendas pintarrajeadas con los colores más chillones, habrá perdido Toledo todos sus atractivos para los amantes de lo bello.*

Al ser desestimada la petición, la Real Academia de la Historia expediría un oficio el 29 de mayo de 1913 en la que constaba su disponibilidad a apoyar a la Comisión de Monumentos de Toledo, que hará cuanto le sugiera su celo para alcanzar de los Poderes Públicos una disposición rigurosa de las facultades de los municipios de poblaciones antiguas, en cuanto se refiera a licencias de obras, alineación de calles y plazas, etc. con el fin de hacer obligatorio el dictamen de la Comisión de Monumentos en la substanciación de tales expedientes, e impedir o dificultar, por lo menos, los desafueros que todos lamentamos. Unos meses más tarde, el 15 de diciembre de 1913, la Comisión de Monumentos de Toledo pediría la redacción de un proyecto de ley que limitara las facultades de los Ayuntamientos en toda reforma urbana *que pueda afectar al carácter propio de las poblaciones medievales o se halle en pugna con sus seculares tradiciones y armonizando el derecho de la propiedad con el respeto debido a los intereses del Arte, haga imposible la repetición de los hechos denunciados.* En el mismo se denunciaba la pérdida patrimonial que se estaba produciendo por la concesión indiscriminada de las licencias municipales en estas fechas: *El insensato afán de modernizarlo todo y las exigencias, a veces mal entendidas, han hecho desaparecer de nuestro suelo en los últimos años curiosísimo ejemplares del arte y de la arquitectura de otros tiempos, y autorizar la antiestética transformación de no pocos predios urbanos de remota fecha con el pretexto de reforzar su fábrica, siendo de temer que, si continua la guerra declarada a todo lo antiguo y el Municipio sigue concediendo licencias, sin previo examen, para obras en el exterior de los edificios de propiedad particular, a la vuelta de algunos años, no muchos, habrá perdido Toledo su especial fisonomía y habrá dejado de ser la mansión predilecta de todos los artistas, con lo que resultarían también perjudicados otros muchos*

*intereses. La Comisión pondría como ejemplo las acciones que se habían hecho en la propia ciudad de Toledo, donde los particulares habían desvirtuado un amplio número de inmuebles de interés histórico y artístico: No ha mucho tiempo, en el mes de marzo último, dirigióse la comisión al Excmo. Ayuntamiento de esta capital rogando encarecidamente que en lo sucesivo no se concediera licencias para obras sin su audiencia previa, cuando se tratara de añejas construcciones de las que tanto abundan entre nosotros, para evitar la repetición de lo sucedido en el callejón de bodegones, uno de lo más típico de Toledo, donde, al ejecutar ciertas obras de reparación y mal entendido ornato, se han cubierto recientemente con una gruesa capa de cal los saledizos de la fachada de una de las casas de aquella originalísima vía, pintándolo todo con el más perverso gusto, después de haber desaparecido los azulejos de la numeración algebraica que ostentaban todas ellas en otros tiempo, y aunque cueste trabajo consignarlo, fue desestimada la pretensión sin que hasta la fecha se nos haya comunicado el acuerdo. De ahí que se pidiera al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes un proyecto de ley que limitara las facultades de los Ayuntamientos, dictando reglas para su ejercicio, en toda reforma urbana que pueda afectar el carácter propio de las poblaciones medievales, o se halle en pugna con sus seculares tradiciones, aunque paradójicamente este interés por el arte se instaba a armonizarlo con el respeto del derecho de la propiedad.*

En el informe que el Conde de Cedillo publicó en el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1915, con el título *La ciudad de Toledo y las reformas urbanas*, nuevamente se instaba a que fueran tuteladas por las Comisiones Provinciales de Monumentos las licencias urbanas otorgadas por las Corporaciones Municipales a los particulares, como había ocurrido en la ciudad de Toledo: *Para informar acerca de los particulares que, en comunicación fechada en Toledo a 19 de mayo de 1913, expone ante nuestra Academia el señor Vicepresidente de la Comisión de monumentos históricos y artísticos de aquella provincia (...) En su escrito, la Comisión de Monumentos da traslado a la Academia de otra comunicación que en el anterior 13 de marzo se había creído en el caso de enderezar al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la imperial ciudad, con motivo de ciertas reformas urbanas realizadas últimamente en Toledo. En este documento censura la Comisión el afán de modernizarlo todo en poblaciones medievales como Toledo, con perjuicio de su arte y de su historia, tan ricos y gloriosos; cita como ejemplo la desgraciada reparación hecha en una casa del callejón de Bodegones (...) donde se cubrió con gruesa capa de cal los saledizos de la fachada (...) afirmando que estas profanaciones se repiten con dolorosas frecuencia por la falta de sentido estético y perversión del gusto; considera urgente que la autoridad local ponga cotos a tantos desmanes con prudentes medidas, como se ha hecho en Córdoba y otras capitales andaluzas; y ruega encarecidamente al Ayuntamiento <que en lo sucesivo no se concedan licencias para obras en el exterior de los edificios de propiedad particular, muy principalmente cuando se trate de añejas construcciones>, sin audiencia previa de la Comisión de Monumentos<sup>2848</sup>. A*

---

<sup>2848</sup> CEDILLO, El conde de “La ciudad de Toledo y las reformas urbanas” en *Boletín de la Real Academia de la Historia*, Vol. LXVII, 1915, p.243.

continuación se hacía un llamamiento por parte de la Comisión de Monumentos a la autoridad municipal para que emitiera las disposiciones pertinentes en orden a frenar la destrucción patrimonial: *Participa tras esto aquella Corporación a la Academia que su petición había sido desestimada por el ayuntamiento; y termina esperando que nuestro Cuerpo <hará cuanto le sugiera su celo para alcanzar de los Poderes públicos una disposición reguladora de las facultades de los Municipios de poblaciones antiguas en cuanto se refiera a licencias de obras, alineación de calles y plazas, cambios de sus nombres, etc., con el fin de hacer obligatorio el dictamen de las Comisiones de Monumentos en la substanciación de tales expedientes e impedir o dificultar, por lo menos, los desafueros que todos lamentamos>. Dos afirmaciones fundamentales surgen del fondo de esta comunicación, a saber: 1ª, en Toledo se cometen con frecuencia, so color de reformas y reparaciones urbanas, verdaderos atentados de leso arte, y 2ª, para evitar y atenuar tales hechos urge que la autoridad local les ponga coto y que la Academia solicite de la Superioridad una disposición que asegure la eficaz intervención de las Comisiones de Monumentos en cuanto se refiera a reformas urbanas de poblaciones antiguas*<sup>2849</sup>.

Muy interesantes son las afirmaciones del Conde de Cedillo que apunta que todavía en 1915 existía una legislación deficiente sobre esta materia, y los posibles conflictos que aparecen con la propiedad privada: *Cuanto (...) a las disposiciones que han de tomarse para prevenir en lo futuro la repetición de semejantes desaguisados, es asunto de más difícil resolución. La legislación en este punto es deficiente. En el vigente Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos históricos y artísticos no hay disposiciones aplicables a evitar las profanaciones antiartísticas en edificios particulares. Además, el asunto ofrece sus dificultades por los conflictos que pueden surgir y surgirán entre la aplicación de determinada ley restrictiva, de una parte, y de otra el derecho de propiedad, derecho sagrado que sigue siendo tal, aunque se trate de fincas urbanas de ciudades históricas y arqueológicas. Remedios más eficaces que el de las disposiciones oficiales, con las que se espera todo de la intervención del Estado, serían la difusión de la cultura y la educación social de carácter artístico, que en Toledo, como fuera de Toledo, tienen mucho camino que recorrer todavía. Pero como estos son remedios lentos y que se compadecen mal con los apremios de una dolencia aguda, fuerza será que de algún modo se suplan con la acción gubernativa dentro de lo consentido por la legislación vigente*<sup>2850</sup>. Alude al posible nombramiento por parte del Ayuntamiento de una Comisión: *(...) En la sesión del 26 de enero del pasado año, el concejal y teniente de alcalde D. Teodoro de San Román presentó una importante moción encaminada a defender la riqueza artística de Toledo y a evitar los atentados contra el carácter peculiar de la ciudad, en la que se proponía el nombramiento de una Comisión especial compuesta por los concejales que por sus aficiones, aptitudes y profesiones se considerasen más aptos para formarla, y que habría de ser constante vigía y centinela para defensa de la historia y del arte toledanos. El nombramiento de esta Comisión podría legalmente llevarse a efecto, en conformidad con el artículo 61 de la Ley Municipal, según la cual los Ayuntamientos pueden nombrar, cuando lo estimen conveniente, Comisiones especiales elegidas como las permanentes y que cesarán*

<sup>2849</sup> CEDILLO, Conde de, 1915, pp.243-244.

<sup>2850</sup> CEDILLO, Conde de, 1915, p.244.

*concluidos que sea su encargo. Según la referida moción, esta Comisión habría de mantener relaciones con la provincial de Monumentos, con la Escuela de Artes Industriales, Patronato del Museo del Greco y demás entidades de carácter cultural que pudieran auxiliarlas en sus trabajos. Acordóse crear la Comisión, y, en efecto, fue nombrada, componiéndose de siete concejales, bajo la presidencia del autor de la moción, Sr. Román. Desde entonces la Comisión funciona y labora para la consecución de los fines a que se debe su existencia; y este mismo hecho, que habla a favor del Ayuntamiento de Toledo y que hace concebir buenas esperanzas en cuanto a la mejor conservación de la Toledo histórico y artística<sup>2851</sup>. El artículo termina refiriéndose al acuerdo tomado por la Academia para dirigirse al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, para que a su vez transmitiera al Alcalde: Reconociendo la Real Academia de la Historia la conveniencia y aun la necesidad que existe de que la ciudad de Toledo, verdadera metrópoli histórico-artística de España, no siga perdiendo su peculiar fisonomía, de que impremeditadas reformas urbanas van desposeyéndola, la Academia acuerda dirigirse al Señor Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes interesándole para que la Superioridad se dirija al Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Toledo previniéndole que en la resolución de los expedientes de reformas y modificaciones urbanas en el exterior de los edificios de la ciudad, entienda en todo caso una Comisión especial, con arreglo a lo que autoriza el artículo 61 de la Ley Municipal vigente, la cual Comisión se asesorará cuando lo crea oportuno de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos, y propondrá a la autoridad local lo que estime conveniente con el objeto de que, sin menoscabo del sagrado derecho de propiedad, los intereses de la Historia y del Arte toledanos, que, en el más hondo y espiritual sentido, son intereses nacionales, puedan quedar siempre a salvo<sup>2852</sup>.*

El Informe del 24 de mayo de 1916 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que fuese declarada Monumento Nacional la ciudad de Toledo se puede considerar el punto de partida en la configuración como Patrimonio Monumental digno de ser conservado aquel tejido urbano que ostentara un valor histórico y artístico, como así era considerado la propia ciudad castellana. La iniciativa habría partido de la Comisión de Monumentos de Toledo, como así consta en el propio Informe de la Academia. La novedad radicaba en considerar como valor monumental algún bien inmueble o mueble independiente, sino estimar como tal un conjunto urbanístico completo, como así hace constar en el propio Informe: *Para ello propone que sea declarada toda la Ciudad Monumento Nacional, no tanto en aquellos que encierra digno de las más inmediata protección, cuanto en sus totales aspectos, en sus pintorescas perspectivas y en sus detalles más característicos (...) pues la ciudad (...) ofrece tales motivos de interés y encanto, ostenta una representación tan genuina de nuestro pasado, lo propio en sus construcciones monumentales cuanto en lo puramente particulares, que aquellos muros y exornos, aquellas calles y plazas, aquellas siluetas y horizontes, hablan elocuentemente, con el más castizo acento, de nuestros hechos gloriosos, de nuestras relaciones étnicas y hasta de nuestras costumbres más entrañables (...). De*

---

<sup>2851</sup> CEDILLO, Conde de, 1915, p.245.

<sup>2852</sup> CEDILLO, Conde de, 1915, p.246.



ahí que se hace un llamamiento a las autoridades públicas pertinentes para que no desaparezca su estructura original, que en nombre de una supuesta modernidad y de intereses particulares iba perdiendo su propia identidad: *Todo esto tiende a desaparecer sin género de duda: los innecesarios derrumbamientos, el saqueo impulsado por la codicia, la pretendida necesidad de mejorar que destruyen lo que sólo le denigra el descuido o abandono en que yace, y lo que es peor, el inmoderado deseo de modernización completamente injustificada, concluirán, si no se remedia, por despojar a Toledo de aquel encanto tan atractivo, convirtiéndola en una ciudad sin interés, semejante a cualquier pueblo de mediano fuste de los existentes en todas partes.* En la lectura del resto del Informe se extrae la gran controversia que en este momento iría surgiendo entre las ideas de una modernidad urbanística basada en los principios de la salubridad, higiene y progreso material frente los que añoraban un viejo modelo de urbe que estaba quedando fuera del ritmo de la renovación social del momento, hecho que no es ajena de reflexión por parte de la propia Comisión de Monumentos, por lo que pide a las autoridades administrativas que tutele la armonía de ambos intereses: *Por ello la Comisión clama y se eleva ante quien puede en súplica de protección y amparo, y encariñada con tantas bellezas, protesta de las verdaderas profanaciones que a cada momento se cometen (...). Pero hay que tener en cuenta que su misión es muy difícil, que su ideal dista tanto de la realidad, que hasta las leyes se oponen a su alcance (...). Luchan contra él no solo el interés particular amparado por las leyes, sino hasta el espíritu de evolución y renovación que a todos alcanza; pues ya que a todos nos impelen las fuerzas de la nueva vida, no cabe duda que sus habitantes se ve estimulados por el deseo de aquellas mejoras, que se imponen como las conquistas de las ciencias, de la higiene y hasta de los progresos modernos, a que se estimen como verdadero derecho. Existe, pues, un conflicto, un problema difícil de resolver, pero que no debe estimarse como insoluble. Si de un lado es digno de todos los respetos el recuerdo del pasado con toda su poética expresión, no cabe oponernos a las aspiraciones del presente con sus reconocidas ventajas; en este caso veamos hasta donde puedan ser compatibles ambos extremos y los medios que deben emplearse para conseguir tan bella armonía.* De esta manera se solicitaba de las autoridades municipales que vigilaran la acción de los particulares sobre sus bienes de interés histórico y artístico: *Si no se llevaran a efecto cambios innecesarios, si de algún modo se detuvieran las iniciativas fuera de toda lógica y necesidad, que acometen a veces los propietarios de los que ellos mismos ignoran su valor e importancia, pues en muchos casos llegan hasta su desprecio; si se repararan en Toledo aquellos restos que causan verdadera pena al ver su estado, y por todos se persiguiera los despojos de la codicia, en defensa de lo que es muy suyo y por muchas razones como intangible, mucho se tendría adelantado en pro de la conservación de lo que constituye el más valioso carácter e interés de la ciudad histórica y legendaria, que vive de su pasado más que de su presente (...).*

## **8. La consagración de los servicios públicos de interés histórico y artístico: Archivos, Bibliotecas y Museos como instrumentos públicos de divulgación de interés histórico y artístico.**

### **8.1 La configuración de Patrimonio Documental como bien de interés general en la etapa de Alfonso XIII.**

Durante la etapa de Alfonso XIII se configura definitivamente el Patrimonio Documental como bien de interés general, en la que se puede apreciar una nueva concepción pública de los archivos, por lo que aquellos documentos que tuviesen interés histórico y artístico se pondrían a disposición del personal investigador e incluso a los particulares que se dedicasen a la investigación histórica. Se iría delimitando un amplio sistema de archivos como parte de la institucionalización administrativa del Estado,

#### **8.1.1 Los Archivos de Protocolos como documentos públicos.**

En 1906 se celebró un amplio debate en el Senado en torno a la naturaleza jurídica de los documentos que estaban depositados en los Archivos de Protocolos del Notariado que tuvieran interés histórico. El senador Palomo defendería la importancia que tenían para la investigación científica y para el conocimiento de la identidad nacional los documentos que habían sido depositados en los archivos de Protocolos: *Existen en España desde antiguo los archivos de protocolos del notariado, en los que se reúnen y depositan todos los documentos antiguos y de nuestra contratación civil, especialmente aquellos a que se refieren a escrituras y documentos otorgados ante los notarios y escribanos reales, desde que se instituyó el Notariado a fines del siglo XV por los Reyes Católicos. Pues bien todos los documentos referentes a los siglos XVI, XVII y XVIII, contienen indudablemente el tesoro histórico más importante que puede haber en España. Hoy que la historia ya no es sólo la biografía de los Reyes y de sus hazañas, sino la manifestación verdadera de la vida social, de la realidad misma, no pueden encontrarse los datos auténticos y los antecedentes exactos necesarios para formar un juicio y hacer el estudio de los hechos sociales antiguos, más que en los archivos de protocolos. Defendía la necesidad de que estos documentos fueran conservados por un personal cualificado, más que por los propios notarios, que cuando dejaban de cumplir el papel administrativo que le correspondía podían destruirlos: Cada archivo de protocolo está entregado en cada distrito a un notario que se llama archivero. Los notarios, como es natural y lógico, dedicados a su trabajo, no cuidan gran cosa de los papeles y documentos curiosos e interesantes que no le ofrezcan verdadero interés para lucrarse de ellos librando certificaciones o testimonios, y como tampoco el Estado le señala edificio propio, ocurre que los notarios archiveros tienen que tener en su casa los documentos a los siglos pasados, dejándolos abandonados en el último rincón (...) por lo que se van destruyendo, perdiéndose lo que puede llamarse la fuente auténtica más interesante para la historia de España. Esto me impulsa a rogar al Sr. Ministro de Gracia y Justicia que se piense por el Gobierno en tratar de separar todos aquellos papeles que pudiéramos llamar históricos, de los que pueden ser convenientemente necesarios para las cuestiones judiciales y para los asuntos particulares, y que se quede el archivo de*

*protocolos convertido en el de documentos referentes al siglo XIX, por ejemplo, separando los de los siglos anteriores, que son los de verdadero interés científico, llevándolos a sitios donde puedan hallarse bien atendidos y cuidados, y en donde los manejen personas entendidas y cultas, y de este modo podría tenerse ese tesoro histórico tan interesante (...) Para que España conserve su riqueza histórica, es necesario que el Sr. Ministro ponga mano en lo que se refiere a los archivos de protocolos, pues lo que ocurre es bochornoso e incalificable, sobre todo en lo relativo a papeles antiguos, para que no acaben de desaparecer (...) porque, los notarios, como es natural, se cuidan de aquellos documentos que puedan lucrarles, principalmente en asuntos de testimonios y certificaciones, correspondientes al último siglo, pero no de aquellos documentos antiguos que consideran que no les sirven para nada (...) no por falta de voluntad, sino porque no le es posible cuidarse de ello, además de que esto corresponde al Poder público atenderlo (...) <sup>2853</sup>.*

En la respuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Rodríguez San Pedro, se enunciaba ya la concepción pública de los documentos depositados en los Archivos de Protocolos, siempre que quedaran garantizados los derechos privados que aparecían inherentes en ellos, especialmente los correspondientes a los derechos familiares: *Es evidente que en todo lo que resulta de los protocolos de nuestras antiguas Chancillerías y Audiencias, hay elementos interesantísimos para la historia del país, si bien no se puede separar de la garantía que en esos protocolos existe para los derechos familiares de multitud de personas que, aún cuando no existan hoy en la Nación, tienen todas sus descendencias viniendo por esta rama de sucesiones algo que no se puede separar del patrimonio particular que a todas esas familias afecta, y que puede tener en toda ocasión la necesidad de estar garantizado por la custodia de los Tribunales de Justicia, bajo cuya autoridad existen estos protocolos. Hay sin embargo, en ellos, y esto es evidente para todo el mundo, multitud de cosas que representan ya más de un interés histórico que no aquel familiar que acabo de señalar, y claro es que para ese interés histórico gana mucho la custodia especial y el orden singularísimo que ha sabido establecer perfectamente en materia de archiveros y bibliotecarios (...) <sup>2854</sup>.*

La Real Academia de la Historia formularía el 15 de octubre de 1911 una Exposición en las que se solicitaba que los archivos de Protocolos sean declarados Archivos Históricos Provinciales y pasen a formar parte del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En su Exposición de Motivos se volvería a resaltar el valor histórico que representaba los documentos conservados en los Archivos de Protocolos, reflejo de la identidad nacional, que el Estado debía de conservar: *Existe en la Península, como á V.E. consta muy particularmente, una riqueza documental inapreciable que abarca toda las esferas y estados sociales; que guarda en sus voluminosos legajos los más fehacientes testimonios de nuestra Fé, de nuestras militares empresas, de nuestros lauros artísticos y literarios; en cuyas páginas reflejadas a maravilla el espíritu de las sociedades que fueron, con sus gloriosos ideales, sus errores y preocupaciones, sus extravíos y grandezas, sus virtudes y sus vicios. Tal Tesoro, lo constituyen los*

<sup>2853</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 26 de noviembre de 1906, pp.579-580.

<sup>2854</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Senado. Sesión de 26 de noviembre de 1906, p.584.

*Archivos Generales de Protocolos, apenas conocidos, casi inexplorados, cuyos documentos datan generalmente del siglo XV, sucediéndose hasta el presente y los cuales corren grandísimo riesgo de desaparecer, arrastrando en su pérdida los más preciosos e insustituibles materiales para reconstruir la historia patria. Se denunciaba a su vez el abandono que por parte de las autoridades públicas se habían tenido de estos documentos, especialmente los pertenecientes a los Archivos de Protocolos: El menosprecio en que se tienen los papeles viejos entre nosotros, ha sido la causa principal de que se hayan destruidos riquísimas colecciones pertenecientes a comunidades, institutos y particulares, las mas de las veces por el bochornoso abandono en que han estado, principal enemigo que amenaza hoy, a la mayor parte de los Protocolos, entre los cuales son raros los que se encuentran en buenas condiciones de conservación, por lo tanto impónese la necesidad de salvarlos, exigiéndolo así la cultura general y el buen nombre y decoro de nuestra nación.* Se aludía a su vez la custodia que habían tenido los Notarios de estos documentos en virtud de la Ley de los Registros y del Notariado, nombrándose de entre ellos en las capitales de provincias los que han de desempeñar el cargo de archivistas, pero se incitaba a que fuera el Estado el que ejerciera el verdadero papel tutelar de estos documentos, al igual que hacía con otros bienes de interés histórico y artístico: *Imposible es que al presente, en que domina el más amplio espíritu de progreso en todas las esferas, en que el Estado se preocupa de salvar de la destrucción hasta los curiosos ejemplares de nuestras antiguas industrias artísticas, se mire con indiferencia la conservación de interesantísimos documentos. ¿Por ventura importa más salvar un cuadro, una escultura o un bordado de mediano mérito que uno de aquellos referentes a nuestros descubridores, conquistadores o colonizadores?.* Incluso se defendía que dichos documentos se abrieran a la investigación histórica y no se convirtieran en papeles exclusivos de ciertas instituciones: *Hoy pues, que se procuran las facilidades y estímulos más eficaces para ensanchar los límites de los conocimientos humanos, prestándose decidido apoyo por los Gobiernos e Institutos Oficiales a los estudios de investigaciones históricas, es imposible, repetimos, que continúen siendo los Archivos de Protocolos feudos de determinadas personas que con muy ligeras excepciones impiden la obra meritísima de dar a conocer datos inapreciables para el conocimiento de nuestra historia.* Con este fin la Real Academia de la Historia solicitaba la protección para esos menospreciados documentos y los que afanosamente los investigan confiando en el celo e interés vivísimo con que la Real Academia de la Historia ha procurado siempre cumplir con los elevados fines de su instituto; respetuosamente se permiten proponer los medios que estimen eficaces para conseguir la salvación de los Archivos de Protocolos sin causar gravamen alguno al Estado y para facilitar a los eruditos el estudio de sus documentos armonizando también los legítimos intereses de los Señores Notarios. En base a estos fundamentos se propondría 1º) Que los Archivos de Protocolos de las capitales de Provincia fueran declarados Archivos Históricos Provinciales constituyendo sus fondos desde la documentación más antigua que posean, hasta la del siglo XVIII inclusive, quedando bajo la custodia de los Sres. Notarios todo el Protocolo del XIX; 2º) Que dichos Archivos Históricos Provinciales pasaran al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; 3º) Su régimen y

organización fueran el mismo que el de los Archivos Histórico Nacional, de Simancas e Indias y 4º) Los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales facilitarían los locales en que hayan de ser establecidos. Por fin, se promulgaría la **Real Orden de 22 de mayo de 1914** por el que se dispondría que los Archiveros de Protocolos dieran facilidades a las personas de notoria competencia en estudios de investigación histórica para consultar los documentos que cuenten más de cien años de antigüedad y ofrezcan valor para dichos estudios, *y de que es buena prueba los existentes en el de Sevilla, por el desenvolvimiento extraordinario de esta ciudad a raíz del descubrimiento del nuevo mundo, quedando en cada caso concreto en manos de los archiveros el criterio de autorización, como responsable que son de la conservación de los documentos que están bajo su custodia, el adoptar las medidas necesarias para la consecución de estos fines.*

### 8.1.2. El destino de los Archivos judiciales.

Los documentos comprendidos en los Archivos Judiciales se convertirían en documentos de interés históricos, por lo que comenzaba a ser promulgada amplias disposiciones para que fueran conservadas como verdaderos bienes de interés público. Serían encargadas a las Comisiones de Monumentos el seleccionar que documentos jurídicos eran dignos de ser conservados. **En el Oficio de traslado de 26 de diciembre de 1916** de la Comisión de Monumentos de Cáceres al Ministerio de Gracia y Justicia se pedía que se proceder al expurgo de asuntos judiciales fanecidos que con arreglo a lo preceptuado en la Real Orden de veintisiete de mayo de mil novecientos once, se estaba llevando a cabo por los Tribunales de Justicia un expurgo y destrucción por medio del fuego de los asuntos judiciales que se estimen inservibles, y que indudablemente se consideraban así en su mayoría, pudieran inspeccionar y seleccionar los documentos jurídicos pertinentes. Entre estos documentos se encontraban como así consta el Informe *pleitos, vinculaciones fenecidas hace muchos lustros, que no interesan ya a nadie, ni aún a las familias que litigaron, por haber cambiado de condición los bienes dotaes de aquellas, y hasta por haber perdido la memoria de que sus ascendientes contendieran sobre su propiedad (...) como medios probatorios, ejecutorias de nobleza, testamentos, escrituras fundacionales y árboles genealógicos, donde suelen encontrarse antecedentes preciosísimos para la Historia, ya general ya local, ya de las familias de los otorgantes, antecedentes que una vez perdidos, es difícil procurarse en parte alguna.*

### 8.1.3. El acceso limitado a los Archivos Militares: la defensa de los intereses nacionales.

Los Archivos Militares se convierten en un amplio depósito de fondos documentales fundamentales en la investigación histórica. En el año 1885 se aprueba el Reglamento para el Servicio del Archivo Central del Ministerio, que regularía el funcionamiento y cometidos del personal. El 22 de junio de 1898 se crea el Archivo General Militar, por el que se instituía un verdadero sistema



archivístico<sup>2855</sup>. Al igual que los Archivos Judiciales, se empezarían a considerar a los Archivos Militares como depósitos de documentos de interés histórico y artístico, por lo que por parte de algunas instituciones como la Real Academia de la Historia se solicitaría que fueran incorporadas para una mejor conservación en el Archivo Histórico Nacional, como se puede apreciar en la Instancia del 18 de abril de 1914, por el que suplicaba al Ministerio *de que todo cuanto en los Archivos Militares embarace o pueda considerarse inútil, se recoja y deposite en el Archivo Histórico Nacional, monumento siempre vivo para los que a él concurren al estudio y la ilustración de la Historia Patria*. Por ello la Real Academia de la Historia pedía que fuera conservada los documentos que estaban depositados en el Archivo General Militar de Segovia, ya que un gran número de ellos habían sido considerados inútiles después de transcurridos sesenta años de su guarda, por no parecer su conservación precisa, por lo que se pedía que dicha documentación se depositase en el Archivo Histórico Nacional, siempre que fuese *conservando su propiedad y uso conveniente el Ministerio de la Guerra; para que en él se custodie, organice y clasifique y pueda servir de elemento de estudio para la Historia, pues la Academia no puede dejar de considerar la copia más ínfima de dichos papeles, por duplicados y multiplicados que se hallen, como documentos preciosos de ella, reconociéndoles la importancia que siempre tiene cuanto se relaciona con la vida, hechos y acciones de los ejércitos de la patria y de los que en ellos*. El acceso a los legajos conservados en los Archivos Militares seguiría estando prácticamente inaccesible. Por la Real Orden de 1904 se dispuso la creación de reservado, por lo que aquellos documentos que fueran clasificado bajo esa denominación, debían conservarse en los archivos separados de los demás, de forma que no podrían ser consultados ni examinados por persona alguna. La Real Orden Circular de 1919 disponía que no se consistiese a particulares, a entidades jurídicas, realizar investigaciones históricas en los archivos militares, salvo en casos excepcionales y bajo previa autorización. Los documentos de consultas no podían de ser de carácter reservado<sup>2856</sup>.

#### **8.1.4. El acceso limitado de los Archivos de Hacienda: la defensa de los intereses privados.**

Aquellos documentos conservados en los Archivos de Hacienda de interés histórico y artístico serían considerados parte del Patrimonio Documental. Sin embargo, su acceso a la investigación científica sería limitado por la **Real Orden de 30 de octubre de 1912** por el que se disponía la prohibición absoluta en los Archivos del Estado de la comunicación al público de los papeles y documentos de carácter económico, sin acuerdo previo y particular en cada caso del Ministerio de Hacienda. A raíz de la Real Orden de 26 de agosto de 1898, dictada por el Ministerio de Instrucción Pública, de acuerdo con el de Hacienda, se dispuso el traslado al Archivo Histórico-Nacional de todos los papeles que se custodiaban en las Delegaciones de

---

<sup>2855</sup> MELGAR CAMARZANA, Manuel; LÓPEZ WEHRILI, Silvia A. *Los Archivos Militares. Qué son y cómo se tratan*, Gijón, Trea, 2010, pp.20-21.

<sup>2856</sup> MELGAR CAMARZANA, Manuel; LÓPEZ WEHRILI, Silvia A., 2010, pp.125-126.

Hacienda, procedentes de las extinguidas Comunidades religiosas (1º), procediéndose a la clasificación de los legajos que se habían reunidos, con la consiguiente preparación de la publicación de un catálogo que ha de facilitar extraordinariamente su servicio (2º), entre los cuales se encontraban multitud de papeles de carácter económico que podían despertar deseos de examen, con fines completamente ajenos al estudio de la Historia (3º). La prohibición vendría fundamentada *por las Instrucciones especiales del Ministerio de Hacienda,, aprobadas por Real decreto de 2 de julio de 1889, que prohibía en su artículo 27 la comunicación al público sin acuerdo previo y particular, en cada caso, del Delegado de Hacienda (Considerando 1º), y el hecho de que aún, habiendo trasladado dichos documentos al Archivo Histórico Nacional, para ser accesible a todo género de facilidades para su estudio e investigación, por la enorme cantidad de antecedentes que pueden proporcionar para el conocimiento de la historia patria, aun respetando todos los intereses privados, no podían hacerse extensivas dichas facilidades a los que únicamente se propongan buscar antecedentes de asuntos de interés económico para promover cuestiones y litigios al Estado, con las mismas armas que éste, inconscientemente les proporcione (Considerando 2º), por lo que no podía acceder a dichos documentos, sin acuerdo previo y particular, en cada caso, del Ministerio de Hacienda.*

## **8.2. El papel del Estado como coleccionista público de bienes histórico y artístico: La reestructuración administrativa de la red de museos estatales a principio del siglo XX.**

Durante los primeros decenios del siglo XX el Estado se va a convertir en uno de los coleccionistas más importante del mercado artístico, al incrementar el número de bienes muebles e inmuebles, convirtiéndose en bienes de dominio público. Al incremento del coleccionismo público se corresponderá con una nueva concepción de la museografía. En la Exposición de Motivos del Real decreto de 7 de septiembre de 1907 se precisaría la conceptualización del museo: *Una de las características del progreso moderno es la creación de museos. Centros docentes en que la erudición colecciona y expone al público en series ordenadas metódicamente, conforme a los principios de la ciencia, los productos de la naturaleza y del arte, para conocimiento práctico y eternas enseñanzas de la que son la realidad de la vida y las altas concepciones del espíritu (...). Pero en España, por causas diversas, los museos no gozan de aquella estimación general que por tan alto concepto merecen; hay quien los considera entidades de mero lujo, como si la instrucción lo fuera en las sociedades modernas; hay quien piensa que son instituciones accesorias; hay quien cree que sólo son centros propios de los sabios y de personas ilustradas, donde el vulgo, por consiguiente, nada tiene que aprender (...). Es menester, por consiguiente, fomentar el amor a tales centros de riqueza intelectual. Irá surgiendo una verdadera institucionalización administrativa con la creación de una red de museos públicos, que supondrá una verdadera reforma institucional tanto en los museos nacionales, como provinciales. Como señala María Bolaños, la herencia decimonónica de la situación de la museografía española no era otra, la de un abismo entre el museo legal y el museo real, ya que la mayoría de ellas eran unas instituciones*

*abandonadas, por lo que se va a vivir un verdadero resurgir del hecho museístico en la España de principios del siglo XX.* La fundación de un Patronato como régimen tutelar de los bienes adquiridos y la regulación de la adquisición de los bienes destinados al coleccionismo público se constituye en una de las novedades más significativa de la regulación museística.

### **8.2.1. La constitución de una red nacional de museos públicos.**

Durante este periodo el Museo Nacional de Pinturas y Esculturas adquiere una importancia relevante en el ámbito cultural español. Una amplia disposición normativa se va a disponer en torno a su gestión institucional, debido, como apunta Bolaños a la etapa de abandono que estaba viviendo la Pinacoteca Nacional por excelencia. Una de las novedades más significativas del periodo sería la creación del Patronato del Museo del Prado a raíz de la publicación del **Real decreto de 7 de junio de 1912** creando un Patronato del Museo Nacional de Pinturas y Esculturas, encargado de recoger y emplear los recursos destinados a la adquisición de cuadros u objetos que por su valor artístico deben figurar en dicho Museo Nacional, siendo Ministro de Instrucción Pública Santiago Alba. La necesidad de dar una respuesta institucional a la organización administrativa del Museo Público por excelencia llevaría a la determinación de crear un Patronato: *La inmensa riqueza acumulada en el Museo Nacional de Pinturas y Esculturas, archivo y depósito de glorias artísticas por ningún otro país superadas, ni siquiera igualadas, exige del Estado atención preferentísima, dejando entender que no había ninguna acción particular que llevara a cabo este cometido como así ocurría en otros países europeos: Muy viva y cuidadosa viene presentándose, desde su creación, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, luchando tenazmente con la falta de medios económicos en el presupuesto y hasta con la ausencia de una acción social, amorosa y solícita, que es en otros pueblos –donde no se demanda del Estado, ni tampoco las organizaciones oficiales pretende conocerlo y resolverlo todo– la primera y más copiosa fuente para la creación y sostenimiento de colecciones y galerías. Mediante la nueva organización, espera el Ministro proponente lograr pronto que aquél deje de ser, como hoy lo es, más que un Museo orgánicamente constituido, una espléndida cuanto irregular Pinacoteca, en la que, al lado de autores soberanamente personificados, falta, aún dentro de las mismas Escuelas Nacionales, completar más series y sistematizar y desamontonar otras. Confía también al nuevo Patronato la preparación del Catálogo, ya que el actual, obra maravillosa en la época en que lo formó un insigne autor, el Sr. Madrazo, merece hoy ya ser rectificado y completado, aplicando a él los frutos de la crítica contemporánea, sagaz y sutil a extremos tales, que ha podido desvanecer no pocos errores y destruir apreciaciones que un tiempo parecieron dogmáticas.* Como preceptuaba el artículo 1º el Patronato del Museo Nacional de Pinturas y Esculturas quedaría encargado *de recoger y emplear los recursos destinados a la adquisición de cuadros u objetos que, teniendo un valor artístico, deben figurar en aquel Museo Nacional; establecer e inspeccionar el régimen interior del mismo de acuerdo con su Director; promover la comunicación del Museo con los demás nacionales y extranjeros; estimular las donaciones y legados de los particulares y de las Corporaciones de toda clase; organizar exposiciones y*

*conferencias que con aquél tenga relación; preparar la publicación del nuevo catálogo.* El Patronato quedaría formado por nueve miembros nombrados por Real decreto, a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre las personas que más se hubieran distinguido por su competencia o por sus servicios al arte y a la riqueza artística española. Como Vocales natos estarían el Inspector general de Bellas Artes y el Director del Museo Nacional de Pinturas y Esculturas. El cargo de individuo de Patronato, sería gratuito y honorífico (art.2). El Presidente sería nombrado libremente en el seno del propio Patronato y a un Vicepresidente, que sustituirá al primero en ausencias y enfermedades (art.3), pudiendo presidir el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes cuando lo creyera necesario, por lo que se reflejaba el carácter centralista de la administración del Patrimonio Monumental. Un funcionario administrativo actuaría de Secretario, dependiente del Ministerio, que como tal figuraría en la plantilla vigente del museo (art.3.3.). El Presidente del Patronato estaría investido de la Delegación permanente de los poderes del Ministro y del especial del Estado, a los efectos de representar ante los Tribunales y en todos los actos de la vida civil al Museo Nacional de Pintura y Escultura (art.4.1). Los Vocales del Patronato del Museo Nacional de Pintura y Escultura serían nombrados en virtud **de la Real Orden de 7 de junio de 1912**, a propuesta del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que serían Santiago Stuart y Falcó, Duque de Alba; Gustavo Baüer, José Lázaro Galdiano, Jacinto Octavio Picón, Pablo Bosch, Manuel B. Cossío, Aureliano Beruete y Alejandro Saint-Aubin. Posteriormente en la **Real orden de 12 de noviembre de 1912** aprobando el Reglamento para el régimen y funcionamiento del Patronato del Museo Nacional de Pintura y Escultura se subrayaba en su artículo 1º que la misión del Patronato del Museo Nacional de Pintura y Escultura sería obedecer y cumplir lo dispuesto en el Real decreto de 7 de junio de 1912, por el cual ha sido creado.

Al mismo tiempo quedaría regulado el régimen patrimonial de aquellos bienes que fueran adquiridos por el propio Museo. En la **Real Orden de 11 de marzo de 1913** aprobando el Reglamento del Museo Nacional de Pintura y Escultura dejaba claro en su artículo 1º que el Museo Nacional de Pintura y Escultura era propiedad del Estado, formado por las obras de los Museos del Prado y de la Trinidad y las adquisiciones hechas y que se hagan en delante de autores anteriores del siglo XIX. El Patronato sería el órgano encargado de adquirir, enajenar de los bienes muebles e inmuebles que formasen o debieran de formar el patrimonio del Museo del Prado, a reserva de la aprobación del Ministro de Instrucción pública y Bellas Arte (art.5.1), subrayándose que su actuación se haría de un modo singular inmediatamente en todo lo que haga referencia al inventario, inspección y cuidado de los cuadros y obras de arte cedidos en depósito a los Museos y Corporaciones, y propondrá al Ministro acerca de ellos lo que considere más conveniente a la defensa de los intereses públicos (art.5.2). La adquisición de los objetos destinados a formar parte de

las colecciones del Museo, debería ser previamente autorizada por el Patronato, deliberando sobre iniciativa de algunos de sus miembros, del Director del Museo o del Inspector General de Bellas Artes (art.6.1), siendo el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, a nombre del Estado, el que realizaría las adquisiciones (art.6.2). El Patronato tendría en principio libertad de administración de estos bienes con la intervención del funcionario ya encargado de este servicio por el Estado, sin otra limitación que las especialmente contenidas en este decreto y las de carácter general que se deriven de la ley de Contabilidad del Reino, los recursos dedicados al Museo Nacional del Prado (art.8.1). Los ingresos del Patronato se compondrían de 1º. De las sumas que figurasen en el presupuesto del Estado con destino á dicho Museo; 2º. Del producto de la venta de Catálogos, estampas, fotografías y cualquiera otra publicación o reproducción que el Patronato acordase de los cuadros y obras de arte contenidos en aquél; 3º. De donaciones y legados; 4º. Del importe de las entradas al Museo, ya en días ordinarios, ya con ocasión de conferencias, Exposiciones y exhibiciones especiales; 5º. De cualquiera otro recurso, autorizado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a propuesta del mismo Patronato (art.8.2). El Presidente del Patronato dará cuenta anualmente al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el mes de enero, de las operaciones realizadas durante el ejercicio anterior en una Memoria, que debería insertarse en la Gaceta de Madrid (art.9). En la **Real orden de 12 de noviembre de 1912** aprobando el Reglamento para el régimen y funcionamiento del Patronato del Museo Nacional de Pintura y Escultura se establecerían algunas novedades referente al régimen patrimonial, por la que se daba una competencia exclusiva al Patronato a la hora de aceptar los donativos y legados que se hicieran al Museo, aunque debían darle conocimiento inmediato al Ministro, indicando al mismo tiempo en qué forma se podría expresar la gratitud a los donantes o a la memoria de los testadores, y exponiendo los motivos en que se funda para no aceptarlos, si hubiere lugar (art.12), considerándose que las adquisiciones hechas por el Ministro, a propuesta del Patronato, se considerarán como propiedad exclusiva del Museo Nacional de Pinturas y Esculturas (art.19), que en caso de que los donativo o legado tuviese un carácter condicional, dicha condición debía de hacer constar en el oficio de aceptación (art.13). El Patronato no podría proponer al Estado la compra de ninguna obra de arte que sea propiedad de cualquiera de sus individuos (art.22).

Unos años más tarde sería promulgada el **Real decreto de 14 de mayo de 1920** aprobando un nuevo Reglamento para el régimen y funcionamiento del Museo Nacional del Prado, fundamentada por las reformas que debían hacerse en la propia Fundación, como así se aprecia en la lectura de la Exposición de Motivos: *Como secuela obligada de la patriótica y cultura labor que la Junta del Patronato del Museo del Prado viene realizando desde que fue instituída, imponíanse ciertas reformas de detalle para conservar con las mayores garantías de*



*seguridad nuestra hermosa pinacoteca, con justicia reconocida por propios y extraños como uno de los más selectos tesoros artísticos del mundo. (...) Inicia, el Patronato una atinadísima reforma; la de que, como acontece con otras similares del extranjero, se llame en lo sucesivo nuestra famosa galería artística Museo del Prado, ya que esta denominación, que ha sido sancionada universalmente por todos los amantes del Arte, fue la primitiva del mismo desde su fundación. Desde este momento nacería oficialmente el Museo del Prado, dotándole de una personalidad jurídica, por la que dependería del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y sería regida por el Patronato que creó el Real decreto de 7 de junio de 1912. Estaría formada su colección por las obras procedentes de los antiguos Museos del Prado y de la Trinidad, y las adquisiciones hechas hasta ahora, así como las que en adelante se hagan con arreglo a las disposiciones legales (art.1).*

En la misma línea que se había fundado un Patronato como órgano tutelar de los bienes históricos y artísticos conservados en el Museo Nacional de Pintura y Escultura, se constituiría un Museo Nacional de Artes Industriales en el Palacio de Cristal de Madrid a raíz del Real decreto de 30 de diciembre de 1912 del Museo Nacional de Artes Industriales. La concepción pública del Museo quedaría reflejada en la propia Exposición de Motivos, en la que se perfila la importancia que representaba para el país contar con una colección de artes industriales: *El proyecto de decreto que acompaña a este preámbulo, tiene por objeto crear en España el primer Museo de Artes Industriales, hace tantos años demandada por artistas y trabajadores diversos y por cuantos conocen lo que en estas materias acontece en el mundo(...) Los alegatos bastan y sobran para afirmar la creencia del Ministro que suscribe de que el nuevo Museo iniciará una poderosa corriente de arte y de modernización en las industrias españolas, especialmente en tantas y tantas que, como la cerámica, la metalistería, las de incrustaciones y damasquinado, la de trabajos en madera, la de tejidos estampados y tapices, las de vidrios y cristal, la de cueros repujados, la de encajes y bordados, tienen en España y ante el mundo una tradición y un relieve envidiables, y por todos envidiados. Para su organización y funcionamiento sería constituido un Patronato bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.1), estando constituido por nueve miembros nombrados por Real Decreto a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre las personas que más se han distinguido por su competencia o por sus servicios al arte industrial en España (art.6.1), siendo además vocales natos, el Inspector General de Bellas Artes, el Director de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, el Director de la Escuela Industrial de Madrid, siendo el cargo de individuo del Patronato, gratuito y honorífico (art.6.2). El Patronato eligiera libremente de su seno un Presidente y un Vicepresidente, que sustituiría al primero en ausencias y enfermedades. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes podría presidir, cuando lo creyera necesario, las deliberaciones como Presidente nato del Patronato (art.7). **Por Real orden de 20 de enero de 1913** sería creado el cargo de Director del Museo de Artes Industriales, que*

como así aparece en la Exposición de Motivos por lo que, *se inspiraría en los altos consejos y decisiones del Patronato, y siendo en cierto modo el órgano encargado de cumplir sus acuerdos y realizar todas aquellas funciones de su vida normal y continua, a que debe presidir un carácter de perfecta homogeneidad, se mueva, sin embargo, en una esfera propia y con la libertad de acción que requiere la labor intensa y práctica de todo centro activo*, siendo de libre elección del Ministro, aunque debiendo recaer en uno de los miembros del Patronato para que pudiera tomar parte en todas las deliberaciones y decisiones de éste (art.3), teniendo como funciones todas las relativas a los servicios técnicos, administrativos y subalternos del Museo, de acuerdo con el Patronato, así como se encargaría de la formación de la Biblioteca del Museo, dando cuenta al Patronato de los trabajos en ella realizados (art.2). Los fondos estarían formados por las adquisiciones hechas con cargo al presupuesto de material consignado al efecto; por objetos de los Museos nacionales que posean obras de carácter decorativo e industrial; por objetos de de aquellos establecimientos del Estado que conserven sin uso objetos que por su índole, antigüedad y valor técnico y artístico puedan figurar en el Museo de referencia; de las donaciones hechas por particulares; de los depósitos temporales, y, por último, de cuantos medios conducentes a este fin permitan las leyes vigentes (art.3).

Otro de los Museos Públicos que va a vivir una transformación institucional en esta etapa sería el Museo de Arte Moderno, anteriormente denominada Museo de Arte Contemporáneo instituido por Real decreto de 4 de agosto de 1894 y reformado más tarde por el de 25 de octubre de 1895, con el objeto de reunir y conservar las obras más importantes de la pintura y escultura española desde la pintura de Goya. La necesidad de una reorganización administrativa daría lugar a la promulgación del **Real decreto de 19 de febrero de 1915** reorganizando el Museo del Arte Moderno, que como así constaría la Exposición de Motivos se encontraba *estacionado en su primitiva construcción, no por decadencia del Arte patrio ni por deficiencias de su dirección técnica, sino por el procedimiento que ha regulado su procedimiento. De aquí el imponerse una nueva reorganización del Museo sobre las bases de una acción oficial más eficaz que la que hasta ahora tuvo y de la privada y competente, no estimulada en ningún momento como procedía, para de esta suerte elevarle a la altura que reclama la opinión pública, que exige la sana crítica y que demanda imperiosamente el Arte español contemporáneo, tan admirado por propios y extraños*. Como en el caso de los otros Museos Públicos, sería creado un Patronato que desde luego principiará a funcionar para llevar a la práctica la nueva organización del Museo de Arte Moderno, que estaría constituido por un Presidente, un Vicepresidente y 11 Vocales, nombrados por Real decreto, a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.2), teniendo como funciones primordiales

Los bienes artísticos que formarían la colección del Museo de Arte Moderno se harían con *las obras de pintura y escultura que más hayan*

*sobresalido en importancia artística desde la extinción de las antiguas Escuelas regionales, cuyo último y excepcional florecimiento personifica D. Francisco Goya, hasta nuestros días; las que adquiriera el Gobierno en lo sucesivo y tengan mérito indiscutible; con las donadas y legadas por las Corporaciones y particulares que merezcan el aprecio técnico, y con todos los demás objetos que, estando en armonía con la naturaleza del Museo, se destinen al mismo por acuerdo de la Junta de Patronato (art.1). Sería el patronato el órgano encargado de intervenir, a reserva de la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la adquisición, enajenación y actos de gestión de cualquiera especie de los bienes muebles e inmuebles que formen o deban formar el Patronato del Museo de Arte Moderno (art.7), proponiendo en una Memoria razonada los nombres de los artistas fallecidos y de indiscutibles méritos de quienes no exista ninguna obra en el Museo, a fin de que se proceda a la adquisición de las posibles por el Gobierno tan pronto lo permitan los fondos del Patronato (art.12). El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes a nombre del Estado, y previo informe del Patronato, haría las adquisiciones de los objetos destinados a formar parte de las colecciones artísticas del Museo (Art.9º). En el artículo 8º. De modo singular y con celo extraordinario, el Patronato actuará inmediatamente en todo lo que haga referencia al inventario, inspección y cuidado de los cuadros y obras de arte cedidos en depósitos a los Museos y Corporaciones, y propondrá al Ministro acerca de ellos lo que considere más conveniente a la defensa de los intereses públicos. En la **Real orden de 12 de julio de 1916** por el que se aprobaba el Reglamento del Patronato del Museo de Arte Moderno se dejaba al Patronato la administración libre de los recursos destinados al Museo, sin otras limitaciones que las especialmente contenidas en el Real decreto de 19 de febrero de 1915, las que consignan en el Reglamento y las de carácter general prevenidas en la Ley de Contabilidad del Estado (art.12), mientras que la aceptación de los donativos y legados que se hicieran al Museo, serían de competencia exclusiva del Ministro, previo informe del Patronato, el cual indicaría también la forma en que se podría expresar la gratitud a los donantes o a la memoria de los testadores (art.14). Las adquisiciones hechas por el Ministro, a propuesta del Patronato y con cargo a los fondos del Museo, se considerarán como propiedad exclusiva de éste (art.30). El Patronato estaría obligado a elevar la encargada la correspondiente consulta a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para la conservación y restauración de cuadros y esculturas (art.34). En la Real orden de 14 de julio de 1916 por el que se aprueba el Reglamento definitivo para el régimen del Museo de Arte Moderno se dispondría que fuera propiedad del Estado (art.1).*

Probablemente sea una de las normas más trascendentales de comienzos del siglo fue sin duda el **Real Decreto de 27 de julio de 1913**, que establecía la creación de Museos Provinciales, a la que se añadiría posteriormente la aprobación del Reglamento, promulgado por el Real Decreto de 18 de octubre

de 1913. En la Exposición de Motivos se realizaba la promulgación de la nueva normativa al quedar obsoleta la anterior de 1857, ya que en cierta manera no se había alcanzado las expectativas en cuanto a los Museos Provinciales: *La memorable Ley de Instrucción Pública de 1857, en su artículo 154, confió al Gobierno el establecimiento en cada capital de provincia de un Museo de Bellas Artes. Esta disposición, en correspondencia con el artículo 25 de la ley de la desamortización de 1837, no ha tenido desde aquella fecha la aplicación que demandaba asunto de tanta trascendencia cultural. Son escasos con relación al caudal artístico de que, a pesar de las mermas que le impusieron la codicia y la ignorancia dispone España todavía, los Museos organizados en nuestra Nación, y no sería en los presentes momentos factible abordar radicalmente un problema que no sólo preocupa a las Naciones, cuya tradición les impone tan plausible solicitud, sino que es objeto también de atención política en países que como los Estados Unidos no sienten, por exigencia de su historia, los estímulos de tan plausible iniciativa. Al mismo tiempo achacaba a las dificultades económicas del Estado el parco resultado que se había dado en el ámbito de la protección del patrimonio histórico-artístico, por lo que se proponía una nueva sistematización administrativa de los bienes instalados en el Museo: Ni los recursos del Estado ni la acción de los organismos ya creados serían suficientes para llevar a efecto en término breve el completo desarrollo de los preceptos contenidos en aquellas disposiciones legales. Las dificultades económicas y técnicas que entraña el problema cree el Ministerio que suscribe haberlas resueltos de un modo satisfactorio, procediendo a la sistematización de todos los Museos de Bellas Artes hoy existentes y organizando con arreglo a las disposiciones consignadas en este decreto tanto a los Museos Provinciales que en lo sucesivo se establezcan como los municipales que puedan crearse en las ciudades cuya importancia artísticas y tradicional así lo exija. Se establecería un Museo en cada provincia como así aparece dispuesto en el artículo 1º: En todas las capitales de provincia donde no exista un Museo provincial de Bellas Artes se procederá a su creación e instalación con el nombre de Museo provincial de Bellas Artes, de conformidad con lo dispuesto en este Decreto. Los que hoy no existen, organizados en virtud de las prescripciones del Real Decreto de 31 de octubre de 1849, ley de Instrucción Pública de 1857 y otras disposiciones especiales, se considerarán asimismo y desde luego reorganizados.*

Una de las novedades más significativas que aparecía en el Decreto fue la configuración de las llamadas Juntas de Patronato. Ya en la Exposición de Motivos aparecía referido el nuevo órgano administrativo: *Para el mejor éxito del proyecto se utilizan los valiosos elementos acumulados en las localidades respectivas, colocando las nuevas instituciones artísticas al amparo de Juntas de Patronato, formadas por elementos conocedores y amantes de las obras que se les confía. Habría dos tipos de Juntas, los de carácter provincial y la de los Museos. En el artículo 5º del Decreto se regularía su composición: La de los provinciales la formarán: el Presidente y cuatro individuos de la respectiva Academia provincial de Bellas Artes, un Vocal de la Comisión Provincial de Bellas Artes, un Vocal de la Comisión Provincial de Monumentos, un representante del Cabildo eclesiástico, figurando además, en concepto de Vocales natos, el Presidente de la Diputación Provincial, el Alcalde y el Director del Museo. La de los Museos municipales se*

*compondrán de alcalde, en concepto de Presidente; de dos concejales, designados por la Corporación Municipal, de dos académicos correspondientes, uno por la Academia de San Fernando y otra por la de la Historia; de un artista de reconocida competencia y de un representante de cabildo o Clero parroquial. Si no existiesen elementos académicos en las respectivas localidades, serán sustituidos por personas competentes en las Bellas Artes, o que se hubieran distinguido por su protección a las mismas.* En el **Real decreto de 18 de octubre de 1913 aprobando el Reglamento de 24 de julio de 1913**, especificaría que la misión de las Juntas de patronatos sería la de fomentar y administrar, en la forma establecida, los Museos provinciales y municipales, representando a este Ministerio en el ejercicio de todas las fundaciones por el citado Real decreto les están confiadas (art.1º). Serían constituidas donde existieran ya organizadas Academias de Bellas Artes, bajo la presidencia del que lo sea de la Academia respectiva (art.2º), especificándose que en las capitales de provincia en donde no existiera Academias de Bellas Artes, las Juntas de Patronato se organizarían, además de con los Vocales Natos con elementos libres, según lo consignado en el inciso del párrafo 3º del art.5º del Real decreto de 24 de julio (art.4º) En el caso de que se creasen Academias en dichas capitales, las Juntas se reorganizarán en la forma prescrita.

En todos los Museos Provinciales habría un Director, nombrado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el sueldo o gratificación que fuese consignado al efecto en el presupuesto de este Ministerio (art.6.1) y un Conservador, nombrado por el Ministerio de Instrucción Pública en propuesta de la Junta del Patronato. Las obligaciones de los Directores provinciales, aparte de las que se consignan en el Reglamento, serán: Informar a la Junta en todos los expedientes para la creación de Museos municipales; proponer la adquisición de objetos que se ofrezcan a la venta o que convenga adquirir, previo dictamen razonado; practicar la visita de inspección a los Museos Municipales que ordene el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes o la Junta provincial, según los casos, informando acerca de las condiciones de los locales, cuantía de los fondos artísticos y medios más adecuados para su conservación y exposición pública; organizar, de acuerdo con la Junta, exposiciones especiales de arte o industrias artísticas que hubiesen florecido en la provincia o que convenga dar a conocer en la misma como elemento de ilustración y desarrollo de la pública cultura, y organizar asimismo conferencias y cursos de vulgarización artística, procurando que los temas de tales lecciones encuentren su demostración en los objetos y obras de arte expuestos en el Museo (art.7).

#### **8.2.2. La inclusión de las colecciones privadas de particulares y Corporaciones Públicas en el ámbito del dominio público por adquisición, donación o depósito.**



Durante esta etapa se va a incrementando el coleccionismo público, bien por la adquisición directa de los bienes por parte de las instituciones pública, bien por donación o por depósito.

**- *El Estado adquirente de obras de arte por compra a los particulares.***

El Estado iría adquiriendo para los respectivos museos públicos colecciones particulares, cuyos propietarios intentaban así conseguir un beneficio económico, siendo la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la encargada de redactar un informe sobre el posible valor artístico e histórico que podría ostentar. Un gran número de estos Informes serían publicados en los Boletines de la Real Academia de San Fernando. La creación del Museo de la Capilla Real por Real Decreto de 3 de julio de 1913 es uno de los ejemplos significativos de la fundación de museos públicos, por la que se fundamentaría su fundación como así aparece en su Exposición de Motivos, en la necesidad de preservar dicho legado patrimonial, que hasta este momento se había conservado en unas condiciones pésimas: *las reliquias se conservan decorosamente en grandes muebles que en el siglo XVII se construyeron para tal efecto, las telas, ornamentos, alhajas, el Misal de la Reina y algunas pinturas se guardan en armarios, a los que falta capacidad suficiente para contenerlos con holgura, y que, además, no reúnen condiciones para poner a cubierto de riesgos graves el tesoro inapreciable que contiene. En cuanto al resto de las pinturas, colección insustituible de obras primorosas del arte flamenco y holandés primitivo, en la que no faltan muestras selectísimas de la pintura italiana y de la española, resulta más inaplazable aún la necesidad de instalarlas en condiciones de seguridad y de decoro que permitan que sean admiradas y estudiadas por todos. Hoy algunas de las obras más importantes forran por dentro las puertas los relicarios de tal modo, que las guarniciones doradas sobrepuestas encubren en torno una parte de la pintura; no se exponen al público sino cuatro días cada año, y solo por gracia especial es dado en otros días contemplarlas, siendo imposible conseguirlo por completo aún utilizando para tal empeño la luz artificial y subiendo por escaleras portátiles, con riesgo de causar desperfectos irreparables y con mengua para la veneración de las reliquias allí depositadas. Las pinturas que originariamente formaron el grande y excelente tríptico de arte holandés primitivo, desaparecen ofuscadas y medio cubiertas por la hojarasca de un retablo barroco, y a la falta de luz para contemplarlas se suman las dificultades con que tropieza el visitante para admirar las que guarnecen los relicarios.* La divulgación de este Patrimonio Monumental de la etapa de los Reyes Católicos se convierte en uno de los fines tutelares del Estado, *que inclinan al Ministro que suscribe a someter a la firma de V.M. el presente decreto, encaminado a conseguir que dichas joyas puedan ser por todos admiradas y a que, sin menoscabar en lo más mínimo la integridad del legado que los Reyes fundadores instituyeron en su Capilla debe tal legado en conjunto ser conservado para las generaciones que nos sucedan en las condiciones de respeto, decoro y garantía que su mérito inapreciable exige.* De esta manera se crearía en la Capilla Real de Granada, un Museo formado por las obras de arte en dicha Capilla existentes, y en especial con las que pertenecieron a los Reyes Católicos, *que actualmente se encuentran fuera del sitio para que se destinaran, y en condiciones desfavorables*

*para su conservación y para su estudio* (art.1). El Museo sería instalado en la antigua Sala Capitular del edificio de la Lonja, que formaba parte integrante de la Capilla Real, quedando bajo la exclusiva custodia y dependencia del Cabildo de Capellanes Reales, únicamente sometido a la inspección de la Comisión provincial de Monumentos competente (art.2). Sería nombrado una Comisión local, formada por un Delegado del Arzobispo de la Diócesis; un Capellán de la Capilla de los Reyes Católicos de Granada, que se designará por Real Orden; el Vicepresidente de la Comisión de Monumentos de aquella provincia; el Presidente de la Academia provincial de Bellas Artes, y el Secretario de la misma Academia, que actuaría como Secretario de la Comisión (art.3).

***– El Estado adquirente de bienes muebles e inmuebles de interés histórico y artístico por donación de los particulares: La donación condicionada y la donación en depósito.***

La donación de los bienes muebles o inmuebles al Estado se convierte en una práctica habitual en esta etapa, por lo que se intenta dar una respuesta institucional con la creación de Patronatos como órganos de administración pública en las que se encargasen de su gestión. La donación podía ser por una institución pública o por los particulares, siendo estos últimos los casos más frecuentes. El Estado, mediante el Ministerio de Instrucción Pública, era el que aceptaba definitivamente dicha donación. En el caso de los Museos Provinciales, sus fondos serían asignados por varios cauces entre los que se encontraban 1º *las pinturas, grabados, estatuas, relieves y demás objetos de arte procedentes de las extinguidas órdenes monásticas y cediendo en calidad de depósito por el Estado a las Corporaciones de la provincia, así como por otras adquisiciones y depósitos posteriores realizados por el Estado*; 2º. *Las obras de artes que por cualquier título posean las entidades oficiales de la provincia*; 3º. *Las donaciones o depósitos voluntarios, constituidos por las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Juntas de fábrica, Patronatos Religiosos o de beneficencia y Cabildos eclesiásticos* y 4º. *Por las donaciones o depósitos voluntarios que constituyan los particulares*. En el artículo 12 del Reglamento de 24 de julio de 1913, al tenor de lo dispuesto en el art.2º del Real decreto orgánico, se dispondría que las Corporaciones y particulares podrían constituir depósitos condicionales de obras y objetos artísticos para ser exhibidos en el Museo. El depósito condicional podrá ser de dos clases: indefinido o a plazo fijo, haciéndose el primero por medio de documento oficial o acta notarial, siendo de cuenta del depositante los gastos que esta última ocasión (2º), mientras que en los casos de plazo fijo, el depósito se haría por un término no menor de un año, siendo igualmente de cuenta del interesado los gastos que motive la justificación del depósito (3º). En todos estos documentos debía de intervenir el Presidente del patronato o quien haga sus veces con el Director del Museo, y en ellos se detallarían las circunstancias de la obra u objeto depositado, consignándose, mediante declaración del

interesado, el nombre del autor a quien la obra se atribuye o a la época a que pertenezca el objeto (4.1). Además de esta clase de depósitos, podrían admitirse en los Museos, en caso de que hubiese local adecuado, y en calidad de exposición temporal, obras de arte antiguo o moderno, siempre que, a juicio del Director, tenga interés artístico o educativo (4.2). Las Juntas del Patronato podrían adquirir, por medio de compra directa, aquellas obras que, a juicio del Director, fueran útiles al Museo, procurando que las adquisiciones recayeran en objetos correspondientes al arte local o regional para formar en lo posible series de obras análogas (art.13.1). En caso de que los fondos de que dispusiera la Junta no fueran suficientes para la adquisición que se propusiera realizar, lo pondría en conocimiento del Ministerio, que debía resolver en cada caso lo más conveniente al fomento del respectivo Museo (art.13.2). El régimen de propiedad de los bienes instalados en los museos provinciales quedaría registrado en un inventario general, que serían redactados por los Directores de los Museos provinciales, *expresando además de las cualidades de la misma, si éstas pertenecen al Estado, Corporaciones o particulares, consignando con toda claridad la propiedad de aquellas, condición legal del depósito, y añadiendo cuantas noticias pueden servir para identificar en todo momento la procedencia y propiedad de la obra* (art.14). La Dirección llevaría, aparte de los registros que creyera necesarios para el buen régimen administrativo y económico, un Registro general de entrada de objetos, un Registro de obras ingresadas en concepto de depósito, donación o adquisición, con el historial correspondiente y un Registro de copiantes y reproducciones fotográficas (art.15). A la elaboración del Registro se uniría la redacción de un Catálogo general de las obras de arte para el mejor servicio público, procurando contenga el mayor número de datos posibles, así en la parte histórica como en la artística. Del Catálogo general podrá hacerse un extracto de carácter popular, redactado en forma sucinta y metódica que responda a las exigencias de la gran masa de público que visite el Museo. Ambos Catálogos serán propiedad de la Junta de Patronato (art.16).

Uno de las primeras donaciones al Estado se produciría desde una institución privada, la Sociedad Arqueológica Ebusitana, cuyo director y fundador fue Juan de Román y Calvet, al ofrecer al Estado las colecciones de importantísimos objetos descubiertos en varios lugares de las islas Fylhinsas, y particularmente en la Necrópolis de Eseso, antigua capital de aquellos territorios, los primeros que ocuparon los cartagineses en su expansión colonial. Por el Real decreto de 9 de septiembre de 1907 sería aceptada la donación del Museo Arqueológico de Ibiza hecha al Estado por D. Juan de Román y Caivet, como fundador y Director de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. Las causas de aceptación de este colección de piezas estaría fundamentada en la importancia de la propia Sociedad dedicada al estudio de las antigüedades, explorando las grutas y parajes donde podían hallarse por haber sido asiento de colonias púnicas, haciendo excavaciones en los hipogeos

de la Necrópolis de Eseso y excitando el celo y la afición de los isleños hacia este género de descubrimientos, por lo que había logrado tras largos afanes y dispendios, reunir en el Museo de Ibiza preciosas colecciones de objeto de un mérito inestimable, *entre los que abundan las monedas, los vasos de barro y vidrio, bustos y estatuillas de barro cocido, muchas de ellas policromadas, armas, utensilios, joyas de metal, amuletos e inscripciones romanas, pudiendo asegurarse que por la variedad y cantidad de los objetos y por el buen estado de su conservación, es éste uno de los principales descubrimientos arqueológicos hechos en España, tan rica en antigüedades*, cumplimentando de esta manera que tiene el Estado *de velar por la conservación de esos restos de las civilizaciones pasadas para ofrecerlos al estudio de los doctos y para la elevación de la cultura nacional, no puede rechazar el generoso ofrecimiento de la Sociedad Arqueológica Ebusitana, y obligado se halla a encargarse de este Museo, poniéndole bajo la custodia y dirección del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, para que sus colecciones, debidamente clasificadas, sirvan de complemento al estudio de las existencias en otros Museos y puedan apreciarse las variantes de las civilizaciones primitivas, como medio de llegar a un conocimiento más perfecto de la Historia patrias en aquellas remotas edades*, a lo que se uniría el escaso coste que iba a suponer para el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes sostener este nuevo establecimiento.

El Museo Arqueológico de Ibiza quedará en lo sucesivo bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y custodiado y regido por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, como uno de los establecimientos a su cargo (art.2º), para lo que sería creada una Fundación protectora del Museo Arqueológica de Ibiza, bajo la dirección de una Junta de patronato, compuesta de un representante del Ministerio de Instrucción Pública, otro de la Real Academia de la Historia, otro del Ayuntamiento de Ibiza, otro elegido por el de Formentera y demás foráneos, otro por la Comisión provincial de Monumentos de las Islas Baleares y tres representantes de D. Juan de Román y Calvet, Director de la Sociedad Arqueológica Ebusitana (art.3), que como así quedaba reflejada en la Exposición de Motivos quedaría encargada de dirigir las excavaciones en los terrenos ya explorados, de buscar nuevos yacimientos arqueológicos y de procurar el acrecentamiento de las colecciones existentes, llevando además un registro de los objetos encontrados por otras personas y que no puedan ser adquiridos para el Museo. La Junta quedaría bajo la alta inspección y con una representante del Ministerio de Instrucción Pública, no podría perturbar la organización del Museo, que al convertirse en establecimiento del Estado, se regirá por los Reglamentos y disposiciones dictados o que en lo sucesivo se dictaren para el régimen y gobierno de los demás Museos Arqueológicos, sin otra limitación que la de no poder trasladarse de Ibiza para ninguna otra región los objetos que constituyen aquellas colecciones, siguiendo lo acordado por la

Sociedad donante. Unos meses después sería promulgada **la Real orden de 27 de septiembre de 1907** por lo que quedaba dispuesta la constitución en Ibiza de la Junta de patronato de la Fundación protectora del Museo de dicha ciudad, por lo que se establecía que al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes le sería correspondido la alta inspección sobre el modo de constituirse y funcionar esta Junta (art.4º), cuyas funciones serían ordenar y dirigir las excavaciones en la Necrópolis de Ereso, con el cuidado de que no fueran interrumpidas, para lo que emplearían a dos jornaleros, pagados de los fondos de la Fundación (art.5.a); Ordenar asimismo otras excavaciones que considerase necesarias para descubrir nuevos yacimientos arqueológicos en las islas Baleares (art.5.b); La redacción de un libro diario de excavaciones, donde serían inscritos la nota detallada de los hallazgos (art.5.c) y Procurar la adquisición, por compra o donativo, de los objetos hallados por otras personas ajenas a la Fundación, y de no ser posible, gestionar para que no salieran de la isla, inscribiéndoles en un registro especial, en el que harán constar las sucesivas traslaciones de dominio (art.5.d).

Se podían encontrar casos de particulares que dejasen su legado patrimonial al Estado, como ocurrió con el legado de la Marquesa de Villahermosa, donando unos cuadros de Velázquez que estaban en su poder, siendo recogido con afecto en las páginas de la revista de Archivos, Museos y Bibliotecas: *La dama insigne por quien hoy se ven dignamente mantenidas las glorias de la casa de Villahermosa, juntamente con el amor a las Artes y a las Letras, desde antiguo vinculado en su linaje, conserva en su palacio de Madrid una colección de pinturas notabilísimas (...) La perla de su tesoro artístico es el retrato de D. Diego del Corral y Arellano, original de Velázquez, que dio a conocer nuestro buen amigo el Sr. Beruete en su obra dedicada al gran maestro español, y que sin duda por ello ha sido recientemente solicitado para una colección de los Estados Unidos. Del valor artístico de tal lienzo, da desde luego la oferta, la cual fue de millón y medio de francos. La noble Duquesa contestó al punto: Por todos los millones del mundo no vendería mi Velázquez, que debe quedar en España, y a mi muerte pasar al Museo del Prado. Contestación digna por cierto de una gran señora de levantado espíritu (...) pero harto extraña, tanto más digna de aplauso y muestra preciosa de que aún hay patria en estos tiempos de mercantilismo en que se metalizan las obras de arte y suscita protestas en el Senado un proyecto de Ley encaminado á poner coto al vergonzoso e incesante despojo de nuestros tesoros artísticos por los capitales extranjeros.*

En el artículo se incluye la carta de agradecimiento que Menéndez Pelayo le enviaría: Excm.a Sra. Duquesa de Villahermosa- Santander 21 de diciembre de 1904. *Como español, como amante del arte y constante amigo de usted (...) no me ha sorprendido este magnífico rasgo (...) Pero este acto es verdaderamente ejemplar, y tiene una trascendencia social que ojalá llegue a romper la dura costra que el egoísmo y la codicia han acumulado sobre los corazones españoles. Cada día que pasa nos arrebatamos una parte de nuestros tesoros artísticos y literarios, y de esta expoliación son cómplices los que en primer término debieran evitarla, los que hacen*



*galas de aficionados y coleccionistas. El espíritu mercantil lo invade todo, y una triste y lóbrega desesperación respecto a nuestro destino nacional, hace á muchos españoles insensibles a tales despojos y afrentas. Los que deseamos conservar para España los restos de la inmensa riqueza tradicional que todavía posee, y que son el único consuelo que nos resta en medio de las desventuras presentes, no podemos menos de aplaudir fervorosamente á los pocos y selectos espíritus que como el de usted han recibido el contagio (...)*<sup>2857</sup>. El propio Mélida a la muerte de la duquesa, recogería en las crónicas de la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, el legado testado a favor del Estado: *Los Museos Nacionales de Pintura y Arqueológico se han enriquecido con las valiosísimas obras de arte legadas en su testamento por la insigne Duquesa, benemérita de la patria. Legado digno de un Príncipe, consiste en dos lienzos de Velázquez, dos arcas de caudales del siglo XVI y una hermosa tapicería tejidos por los cartones de Rafael de Urbino.*

Sin duda alguna el caso más significativo lo constituye la donación del Marqués de la Vega Inclán al entregar al Estado el llamado Museo del Greco, que había fundado a sus expensas, después de ser ofrecido al Congreso celebrada el 31 de octubre de 1909, por el Duque de Tamames, en nombre del propio Marqués. Por la Real orden de 27 de abril de 1910 sería admitido la oferta hecha por el Marqués de Vega Inclán, del Museo del Greco, aceptando el edificio que acogería el propio Museo del pintor cretense, con el objeto de que en su día constituyera la base de un Museo de Arte Español, con el objeto de que pudiera ser conocida y estudiada la trayectoria de la pintura española, desde el Greco hasta el pintor Vicente López (art.1º). Sería creada un Patronato encargado de la organización y gobierno de la referida institución artística (art.2º), siendo nombrado como miembros de la misma a Don Aureliano Beruete, como crítico de arte; D. Joaquín Sorolla, como pintor; Conde de Cedillo, Manuel Cossío, como autor de un estudio magistral acerca del Greco, D. José Ramón Mélida, como Académico de la de San Fernando, y D. José Villegas, como Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura (art.3º), encargando a Eladio Laredo y Carranza, constructor del citado Museo, de realizar en lo sucesivo las obras de conservación y ampliación del edificio (art.4º). Sería consignado en los presupuestos del Estado la cantidad que el Gobierno estimase necesaria para el sostenimiento del personal subalterno de aquél, que deberá siempre nombrarse a propuesta del Patronato, y gastos de instalación y entretenimiento (art.5º). Tras admitir el Estado la cesión del museo por Real Orden de 27 de junio de 1910, se inauguraría el 12 de junio de 1910 con la propia asistencia del Monarca. Por Real Orden de 27 de abril de 1910 se constituiría un Patronato formado por Aurelio de Beruete, como crítico de arte; Joaquín Sorolla, como académico de la historia; Manuel Cossio, biógrafo del pintor cretense; José Ramón Mélida, académico de San Fernando;

<sup>2857</sup> MELIDA, José Ramón, Los Velázquez de la Casa de Villahermosa, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año IX, Febrero de 1905, N.2, pp.89-92.

y José Villegas, como director del Museo Nacional de Pinturas. El 31 de mayo del mismo año sería nombrado el marqués presidente del patronato del museo.

Unos meses después se dispondría por el **Real decreto de 10 de septiembre de 1911** la constitución y funcionamiento del Museo de El Greco en Toledo. En la disposición precisaba que el Museo entraba a formar parte de la propiedad del Estado tras haber sido cedido por Real Orden de 27 de abril de 1910 (art.1º), dejando la dirección, conservación y administración de dicho Museo encomendada a un Patronato especialmente designado por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, *con arreglo a los preceptos de este decreto* (art.2º). El Patronato se compondría de ocho Vocales, seis de los cuales han de reunir alguna de las condiciones siguientes: ser crítico de arte acreditado por especiales publicaciones, pintor laureado con primera medalla en Exposiciones Nacionales, Académico de Número de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando o de la Historia o Director de uno de los Museos Nacionales. Será Vocal séptimo el fundador o donante del Museo, la persona que éste designe o nombren, en su caso, los herederos; el octavo será designado por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre los Arquitectos Arqueólogos al servicio del Ministerio (art.3º). El Patronato nombraría, entre los Vocales, el que hubiera de ejercer las funciones de Presidente, que tendría como función mantener las relaciones oficiales con todos los Centros y entidades con los que el Patronato debe comunicarse (art.4º). Entre las facultades del Patronato estarían proponer al Ministerio la adquisición de toda clase de bienes necesarios para el cumplimiento del fin del Museo (art.5.1); Aprobar el presupuesto anual de sus ingresos y gastos, que debería someterse a la superior resolución del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.5.2); Proponer al Ministerio la ejecución de todas las obras de ampliación, reforma y mejora necesarias en los locales destinados al Museo (art.5.3); La autorización de los particulares y entidades que soliciten obtener copias, fotografías y reproducciones de los objetos artísticos existiera antes en el Museo, siempre que con ello no se perjudiquen aquellos en los fines de la institución (art.5.4); Realizar todos los actos de gestión y administración encaminados al fin que se proponen (art.5.5); Aprobar las cuentas que debían de rendir anualmente al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.5.6) y Proponer al Ministerio el nombramiento y separación de su personal auxiliar, administrativo, técnico y subalterno (art.5.7). Constituirán el patrimonio del Patronato: Los bienes que adquiriera o disfrute procedentes de herencias, legados o donaciones (art.7.1); El importe de la venta de las publicaciones y trabajos que se hubieren autorizado sobre los objetos artísticos existentes en el Museo (art.7.2); Las cantidades que hoy se consignan y se autoricen en lo sucesivo como subvención para los servicios encomendados al Museo, en el presupuesto general del Estado (art.7.3); Los bienes, rentas o subvenciones que le sean entregados por Corporaciones o Centros oficiales con destino a sus fines generales o a determinadas aplicaciones (art.7.4). El

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes podría ampliar las dependencias del Museo, encomendando al Patronato la organización e instalación de servicios especiales y complementarios, en los edificios y locales de Toledo, cuya propiedad correspondiera al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes (art.8). Los bienes, derechos y acciones que constituyeran el patrimonio del Patronato como pertenecientes al Estado, quedarían sometidos al cumplimiento de los preceptos de la ley de Contabilidad de 1º de julio del año actual (art.9). El Patronato formularía un Reglamento especial para los servicios de organización y régimen interior de dicha institución, siendo sometida a la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.10). Por la **Real orden de 10 de septiembre de 1911** sería confirmado los cargos que actualmente desempeñaba como Patronos del Museo del Greco, por lo que de conformidad con lo proveniente en el artículo 3º del Real decreto de esta fecha, se dispondría que sería confirmado en los cargos que actualmente desempeñan, como Patronos del Museo del Greco, a los señores Marqués de la Vega Inclán, como donante de dicho Museo; D. Aureliano de Boruete, como crítico de arte; D. Joaquín Sorolla Bastida, como pintor; Conde de Cedillo, como Académico de la Historia; D. Manuel Cossio, como autor de un estudio magistral acerca del Greco; D. José Ramón Mélida, como Académico de la de San Fernando, y D. José Villegas, Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura. El museo se iría ampliando en sucesivas fases; así en 1914, coincidiendo con los actos celebrados por el tercer centenario de la muerte de El Greco, creando cuatro nuevas salas en las dos plantas del edificio. En el año 1921 se inauguraba una nueva sala con quince cuadros, de los cuales cuatro habían sido donación del propio Vega Inclán y finalmente, entre 1924 y 1925 se culminaría el crecimiento del museo con la instalación de una capilla. Al mismo tiempo el Museo de El Greco se convertiría en un foco de irradiación del turismo de la ciudad de Toledo.

Dentro del ámbito de las donaciones se fue incorporando la práctica de la donación condicionada de los bienes artísticos y arqueológicos al Estado, como fue el caso de la donación de la colección Cerralbo, en virtud de las Reales órdenes de 10 de abril y 24 de septiembre de 1924. La figura de D.Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo (1845-, va a ser determinante en el panorama del coleccionismo erudito de obras de arte de principios del siglo XX. Personaje de indiscutible valía cultural, realizaría innumerables excavaciones arqueológicas, que le daría una relevante fama en el ámbito de la investigación, llegando a ser invitado a participar en el proyecto de Ley de Excavaciones de 1911, y al mismo tiempo sería nombrado miembro de la Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia<sup>2858</sup>. Sus continuas excavaciones y su vocación por el arte le llevaría a amasar una

<sup>2858</sup> ALVAR, J. "El Marqués de Cerralbo, la Arqueología y el coleccionismo" en BELTRAN, J.; CACCIOTTI, B. y PALMA, B. (eds.), Arqueología, coleccionismo, y Antigüedad. España e Italia en el siglo XIX, pp.23-36.

amplia colección, producto primero de la propia herencia de su abuelo, el XV marqués de Cerralbo, que aunque escasa, y posteriormente de su propio ansia de coleccionista. Como apunta Pilar de Navascues, su colección fue considerada una de la más completa debido a la variedad de piezas, desde pinturas hasta grabados, esculturas, mobiliario de origen francés, español e italiano, etc. Su intención fue la de crear un palacio-museo siguiendo el ejemplo de los que ya existían en Francia e Italia, pero con la consideración de que quería fundar un museo de carácter público, ya que en opinión del propio Cerralbo, eran demasiados escasos en este momento en España, siendo necesarios para aleccionar el gusto y la afición por las obras de arte, por lo que planearía la construcción de un edificio que albergara al mismo tiempo una residencia privada y una galería de arte o museo de carácter público. Con este objeto el propio Cerralbo donaría al Estado su colección en forma de legado, como él mismo indica: *Toda mi vida me he ocupado mucho en coleccionar obras de arte, arqueológicas y de curiosidad, habiendo conseguido reunir importantes y muy valiosas colecciones, y puesto que no tengo herederos forzosos he resuelto disponer de estas colecciones en forma que perduren siempre reunidas y sirvan para el estudio de los aficionados a la ciencia y el arte. Para realizar tal propósito he convenido con mi hija política, dueña de la citada casa, en que por siempre jamás quede el piso principal, portería y gran escalera de su dicha casa, calle de Ventura Rodríguez número dos en Madrid, destinado a contener todas las colecciones mías, tal y como se hallan establecidas y colocadas por mí, sin que jamás se trastoquen ni por ningún concepto, autoridad o ley se trasladen de lugar se cambien objetos ni se vendan. Quedarán pues mis colecciones para siempre jamás establecidas en dicho principal (...)*<sup>2859</sup>.

Con la promulgación de la **Real orden de 9 de febrero de 1915** sería aceptado los donativos hechos por el Marqués de Cerralbo, uno con destino al Museo Nacional de Ciencias Naturales y otra al Museo Arqueológico Nacional, siendo aceptada dada por el propio donante, que en cierta manera limitaba la acción del Estado sobre dichos bienes sin la autorización de su antiguo propietario, por lo que se dispondría. Por su importancia creo interesante recoger establecido por Cerralbo sobre la utilización de los bienes donados: *1º Que en el Museo de Ciencias Naturales como en el Arqueológico, se destinen salas exclusivas para mis colecciones, apellidando aquellas con mi nombre, inscribiendo en una placa o cartela que cuanto contienen proviene de mis exploraciones científicas y son donación del Excmo. Sr. D. Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo; 2º Que jamás se podrá vender, donar ni cambiar objeto alguno de los regalados por mí y contenidos en dichas salas, ni transferirlos a otras sin mi consentimiento. 3º Que la colocación de los objetos en las salas será bajo mi dirección y a mi gusto, con la natural intervención de los respectivos Directores; 4º Como todos los objetos están clasificados por mí, se conservarán y expondrán estas*

---

<sup>2859</sup> NAVASCUES BENLLOCH, Pilar; CONDE DE BEROLDINGEN GEYR, Cristina “D. Enrique de Aguilera y Gamboa, Coleccionista y Fundador del Museo Marqués de Cerralbo”, *Goya, Revista de Arte*, Núm.267, Madrid, 1998, pp.330-331.

*clasificaciones, y siempre que merecieran alterarse por el juicio de los doctos Director o Profesores de los respectivos museos, se podrían agregar esas alteraciones, pero con mi asentamiento, jamás difícil para la lección de la Ciencia*<sup>5º</sup> *Que si necesitase yo sacar algunos objetos para mis estudios, podré hacerlo, y aún llevármelos a mi casa, con obligación de devolverlos al Museo; 6º Que podré hacer las fotografías, dibujos, grabados y vaciados de los objetos que me parezca y cuando lo desee; 7º) Que podré llevar a Congresos y Exposiciones los objetos que me convengan, siempre con la obligación de devolverlos al Museo respectivo; 8º) Si en esas salidas de objetos o viajes se deteriorase o perdiera alguno, no se me podrá exigir responsabilidad de ninguna clase; 9º) No se podrá sacar vaciado algunos de objetos sin mi permiso, ni regalarse vaciados sin mi autorización; 10º) La conservación, custodia, reparaciones y cuanto corresponde al cuidado, limpieza, defensa e instalación, correrá a cargo de dichos Museos, o sea del Estado, que no dudo lo hará adecuadamente; 11º) Como donación la hago graciosamente, no se me exigirá derecho alguno de transmisión ni escritura y 12º) Teniendo gran parte de esas colecciones en mi casa de campo de Santa María de Huerta, provincia de Soria, la traslación será por cuenta del Estado.* El contenido de estas condiciones se repetiría en otras donaciones que en este momento se fueron produciendo por eruditos locales a un amplio número de museos locales. Al mismo tiempo el Estado aceptaba las donaciones objeto de este expediente en la forma y con las condiciones mencionadas, resaltando al propio donante *por el especial aprecio que el Estado hace de su generosa conducta acerca del particular, y que se publique la presente resolución en la Gaceta de Madrid para que se tenga noticia oficial del acto plausible realizado por el mismo*, resaltándose el valor que tenía la propia colección, *que han producido la resultante de que las colecciones de aquél sean tenidas dentro y fuera de nuestras fronteras como de extraordinario valor, mérito y rareza*, por lo que resultaba significativo que estos bienes permanecieran en España, de ahí el mérito del donante, *por lo que la donación de que se trata ofrece singular relieve, revelando en el donante a la par que competencia reconocida y notoria en la materia, su acendrado patriotismo al elegir además los Museos Patrios con preferencia a los extranjeros para depositarlos.* A raíz de las Reales Ordenes de 10 de abril y 24 de septiembre de 1924 el Estado Español aceptaría el legado, constituyéndose diez años después la Fundación Museo Cerralbo por Orden de 22 de marzo.

Finalmente, cabe mencionar la llamada Colección Cambó, que aunque su figura sale ya fuera del marco cronológico de este estudio, se incluye no solamente porque la adquisición de las principales obras de la colección lo haría entre 1920 y 1930, sino porque en si misma representa el cambio que va a producirse en la concepción de las colecciones artísticas en el ámbito privado, ya que como apunta Joan Sureda, Francisco Cambó nunca fue en sentido estricto de la expresión un coleccionista particular, ya que desde que inició su colección, su voluntad fue crear un museo de visita pública, museo que vendría a llenar las lagunas que de distintas escuelas artísticas tenían los museos



españoles y en especial el Museo del Prado<sup>2860</sup>, o Ramón Guardans Valles quien afirma haciendo referencia de la actitud coleccionista de Cambó, como *un coleccionista al uso, forma la colección para su goce y disfrute y para integrar su patrimonio personal, sin perjuicio de disponer, para cuando él ya no exista, una eventual entrega a la comunidad. Cambos, por el contrario (...) nunca consideró los cuadros como propios, ni los escogió por interés egoísta sino por las necesidades de servir (...) Con tal desprendimiento propio, y aún familiar, la va integrando y la entrega, que en sus disposiciones testamentarias prevé que su hija y heredera puedan escoger una sola obra del conjunto, en testimonio y recuerdo de la colección, en circunstancias normales. Sólo en el caso de producirse un minusvalor en la herencia, le confería el derecho de retener y vender cuantas quisiera (...)*<sup>2861</sup>. Sin embargo, los acontecimientos posteriores fueron otros, a pesar de que en 1941 el Patronato del Museo del Prado aceptaría el legado de un gran número de los cuadros de su propiedad, que Juan Gaya calificaría como el donativo más importante de toda la historia del Museo.

La donación en depósito en los museos públicos de bienes de interés histórico y artístico se convertiría en otra práctica habitual durante este periodo, por lo que un gran número de obras artísticas que hasta este momento habían quedado ajena al conocimiento del público, por lo que de esta manera se intentaba cumplir con uno de los objetivos de la tutela pública del Estado Liberal, la divulgación pública del Patrimonio Monumental. La donación podía ser de los particulares o de las propias instituciones públicas, como fueron el caso de Ministerios, como queda reflejado en la Real orden de 31 de marzo de 1911 disponiendo que los retratos de los Monarcas españoles Carlos IV y su esposa Doña María Luisa, obras de Goya, propiedad del Ministerio pasen en calidad de depósito, al Museo Nacional de pinturas. El análisis de esta disposición nos permite reflexionar en qué condiciones se realizaría la trasposición del dominio, cuyo fundamento dejaba claro que el objeto primordial del mismo estaría en la divulgación pública del Patrimonio Monumental: *Es carácter distintivo de la época presente es el de fomentar el desarrollo de la cultura nacional, por medio de Bibliotecas y Museos, donde se facilite el examen y consulta de las obras científicas y artísticas que antes se ocultaban cuidadosamente (...) añadiéndose concretamente en el caso de los cuadros de Goya, que quizás desde la época en que se pintaron, habían permanecido en el edificio que ocupaba este Ministerio, por lo que su instalación en un museo público contribuirían al estudio más acabado y completo de sus cuadros; siendo de notar, que estas dos pasaron inadvertidos para casi todos sus biógrafos, lo cual, si no realzan su mérito, contribuye a hacer más interesante su estudio.* Sin embargo al mismo tiempo dejaba claro que la donación sería condicional, *porque el Ministro que suscribe no quiere que el Ejército, a quien representa, se desprendra de*

---

<sup>2860</sup> SUREDA, Joan La Colección Cambó. Notas para una valoración artística, en *Colección Cambó*, Caja Barcelona, 31 de enero a 31 de marzo de 1991, p.67.

<sup>2861</sup> GUARDANS VALLÉS, Ramón “Origen y vicisitudes de la Colección Cambó”, en *Colección Cambo*, 1991, pp.51-52.

*la propiedad de joyas tan valiosas en el orden artístico. Tal vez pudiera interpretarse algún día que la donación se efectuó por tenerlas en poca estima y el Ejército español, que hermana todos los grandes ideales, que cultiva todas las nobles profesiones, y que en aras del esplendor de la Patria está dispuesto a todos los sacrificios, si cede gustoso estos dos cuadros que tuvo en lugar insigne (...) lo hace guiado solo por la conveniencia general, a la cual subordina a su propio interés.*

Al igual que existieron instituciones culturales de ámbito público nacido de la iniciativa privada, se fueron constituyendo durante esta etapa los patronatos privados de Bellas Artes, como fue el caso de la fundación del Instituto de Valencia de Don Juan, nacida bajo los auspicios de Don Guillermo Joaquín de Osma (1853-y Doña Adelaida Crooke, que a lo largo de su vida fueron adquiriendo un gran número de obras de arte. Doña Adelaida sintió desde muy niña una gran pasión por el mundo artístico y arqueológico, al igual que su marido, que fue persona de una actividad fuera de lo común, además de dedicarse durante un tiempo considerable a la política, convirtiéndose uno de los más importante coleccionista del momento, al tiempo que fue autor de un gran número de libros sobre el mundo artístico. La gran colección de obras de arte que reunieron el matrimonio, tendría un punto de partida en la herencia testamentaria a la muerte del padre de Doña Adelaida, Don Juan Bautista Crooke, acaecida en 1904, que dejaba a su heredera todos los objetos de arte que poseía en su residencia, sita en la carrera de San Jerónimo, que formaría el primer núcleo de las obras del futuro Instituto. Al no tener descendencia, Don Guillermo de Osma y Doña Adelaida, decidieron de común acuerdo hacer una fundación que sirviera para conservar y reunir todas las colecciones, acrecentarlas y promover las relaciones arqueológicas de España con otros países, y no al Estado del que no se fiaban en absoluto, para lo que levantarían un palacete de estilo morisco en la calle Fortuny. En el archivo del Instituto de Valencia de Don Juan se conserva mecanografiada una memoria redactada por D. Guillermo Joaquín de Osma y fechada en diciembre de 1916, en donde se establecía las condiciones que debía de tener el funcionamiento de la institución. Es de interés recoger en sus propios términos cual era la concepción pública de esta colección, ya que Osma no concebía su Fundación en manera alguna como labor de vulgarización, sino todo lo contrario, sino que para Osma la misión que tenía que realizar era de *investigación y de estudio*, y *que cuando haya de servir al público, y por público se entiende a la muchedumbre, ha de ser sin reconocerle a la muchedumbre derecho alguno a ser servida*, horrorizándose la actitud que tenía algunos visitantes del Museo Arqueológico Nacional *dejando tras sí una aportación de escupitajos, colillas y barro traído en los pies*. Y es que establecería en una cláusula que en caso de que no fueran cumplidas las condiciones de los estatutos del Instituto, todas las colecciones pasarían a la Universidad de Oxford. La Fundación de los Condes de Valencia de Don Juan sería reconocida como tal el 11 de agosto de 1918, estando su primer patronato formado por figuras de la cultura, Don Antonio

Maura, D.Miguel Asín y Palacios, el duque de Alba, Sir Hércules Read, director del British Museum, y el hispanista Archer Milton Huntington<sup>2862</sup>.

### **8.2.3. La asignación de un crédito presupuestario por parte del Estado.**

Con la promulgación de la Ley de 1913 y su consiguiente Reglamento se intenta dotar de un presupuesto anual con el fin de poder solventar los problemas de financiación que había sido uno de los problemas más significativos en la institucionalización museística. De esta manera se establecería que el Estado consignaría anualmente en los presupuestos generales la partida necesaria para el fomento de los Museos provinciales y municipales que se organicen e incorporen (art.9.1), cuya distribución se verificaría conforme a las necesidades e importancia de cada uno de ellos y en la proporción que se acuerde (art.9.2). Para que un Museo Municipal pudiera considerarse incorporado se necesitaba justificar que se había consignado en el presupuesto de la localidad las cantidades necesarias para el sostenimiento del mismo, y demás gastos de carácter permanente, con arreglo a lo propuesto por la Junta de Patronato provincial (art.9.2). La incorporación sería acordada en cada caso por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.9.3). La formación del presupuesto de ingresos de los Museos provinciales quedaría regulado por el artículo 5º del Reglamento, que constaría de: 1º. Las cantidades consignadas en los presupuestos de gastos de la Diputación y Ayuntamiento de la capital y destinadas expresamente para este servicio; 2º. Las sumas con que el Estado contribuiría a los fines de estos Museos; 3º. Los ingresos eventuales de entrada, derechos de fotografiar y producto de la venta de catálogos y demás publicaciones de catálogos y 4º. Los donativos especiales hechos por Corporaciones o particulares en favor de los Museos.

### **8.2.4. La declaración del Museo de Bellas Artes como utilidad pública.**

Una de las novedades más importantes en la regulación jurídica de los museos, especialmente los provinciales serían la declaración de utilidad pública, por lo que incitaba una mejor gestión institucional del coleccionismo público, acrecentando aunque fuera teóricamente el papel divulgador de la cultura que representaba en la sociedad. Entre los museos provinciales que fueron declarados como de utilidad pública en esta etapa se encontrarían los siguientes:

- Real orden de 21 de junio de 1915 declarando de utilidad pública los Museos Provinciales de Bellas Artes de Málaga y Palma de Mallorca.
- Real orden de 13 de septiembre de 1915 declarando de utilidad pública el Museo provincial de Bellas Artes de Avila.

---

<sup>2862</sup> BARRIO MOYA, José Luis Un coleccionista atípico: Don Guillermo Joaquín de Osma, *Goya*, 267, Madrid, 1998, pp.367-369. DE ANDRES, Gregorio La fundación del Instituto de Valencia de Don Juan, Ayuntamiento de Madrid, Aula de Cultura, Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 1984.

- Real Orden de 2 de noviembre de 1915 declarando de utilidad pública el Museo municipal y regional de Santa Cruz de la Palma (Canarias).
- Real orden de 25 de febrero de 1916 declarando de utilidad pública el Museo provincial de Cádiz.
- Real orden de 19 de octubre de 1917 declarando de utilidad pública del Museo provincial de Bellas Artes de Cáceres.
- Real orden de 23 de octubre de 1917 declarando de utilidad pública del Museo de Bellas Artes de Granada.
- Real orden de 6 de junio de 1921 por el que se declara de utilidad pública el Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia.

## **9. La frustrada aplicación de la ley de 1902 sobre catalogación monumental en la etapa de Alfonso XIII.**

### **9.1. El papel de las Comisiones de Monumentos en la elaboración de la catalogación monumental.**

Durante la fase anterior se habían puesto las bases legislativas para confeccionar los catálogos de Monumentos Históricos y Artísticos de las provincias de España, que se había convertido en una labor imprescindible a la hora de proyectar una verdadera tutela del Patrimonio Monumental. La elaboración de la catalogación se pondría en marcha a lo largo de esta etapa, pudiéndose afirmar en términos generales que esta labor de catalogación fue fallida. En los diez primeros años de vigor del decreto, tan sólo se habían contratado catorce catálogos, que además de los elaborados por Gómez-Moreno, se incluirían los de Badajoz, Córdoba, La Coruña, Guadalajara, Huelva, Málaga, Murcia, Palencia, Pontevedra y Sevilla. Entre 1911 y 1920 serían veinticuatro, los de Álava, Albacete, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Jaén, Logroño, Lugo, Madrid, Navarra, Orense, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia y Valladolid<sup>2863</sup>. Uno de los problemas más significativo de la catalogación fue el de su publicación, ya que a pesar de que estuviera prevista en la legislación la asignación económica, no llegaba. De ahí que solamente se publicaran la de Álava, en 1915, de contenido poco científico; el de Ciudad Real, redactado por Bernardo Portuondo, publicado en 1917; los de Cáceres y Badajoz, serían encomendados a José Ramón Mélida, y serían publicados entre 1924 y 1926 y los de León y el de Zamora, anteriormente aludidos, obra de Manuel Gómez-Moreno, se publicarían en 1925, 1926 y 1927<sup>2864</sup>. Otros como el de Toledo, elaborado por el conde de Cedillo en 1919, no sería publicado hasta 1991.

<sup>2863</sup> PEREDA ALONSO, Araceli, "Los inventarios del patrimonio histórico-artístico español" en *Análisis e Investigaciones*, 9, 1981, pp.39-40.

<sup>2864</sup> Posteriormente se fueron publicando los de Palencia, elaborado por Rafael Navarro García, publicado entre 1930 y 1939; el de Cádiz, en 1934, que fue elaborado por Enrique Romero de Torres; el de Huesca, publicado en 1942, redactado por Ricardo del Arco; en 1957, el Instituto Diego Velázquez publicó a Francisco Abad Ríos el catálogo de Zaragoza;

El Catálogo de Huelva puede ser uno de los mejores elaborados, en este caso de manos de un prestigioso en la materia, Rodrigo Amador de los Ríos (1843-1917), nombrado en 1911 Director del Museo Arqueológico Nacional, cargo que desempeñó hasta 1916, año de su jubilación, en virtud la R.O. de 23 de noviembre de 1908 redactaría el catálogo onubense, constando de dos tomos, desarrollando en el primero las Notas Geográficas, Orográficas, Hidrológicas y Minerológicas de la provincia y las Notas Históricas, para posteriormente catalogar pueblo por pueblo, que continuaría en el segundo tomo<sup>2865</sup>. A modo de prefacio aparece un importante alegato a favor del rigor científico en las investigaciones: *Fundamentar por consiguiente el estudio sistemático de la Provincia en el doble concepto histórico y artístico, sobre quimeras y fantasías, o sobre hipótesis de mayor o menor verosimilitud, pero ni contrastadas ni contrastables, o sobre afirmaciones tan arriesgadas como gratuitas, según lo han hecho algunos escritores, además de ser tarea estéril y aun dañosa por su falta consistencia y por su falsedad la más de las veces, resulta de todo en todo imposible, siendo labor contraproducente e inaceptable, a la altura alcanzada hoy felizmente por la ciencia historial, que no se satisface sino con el testimonio y con la prueba*<sup>2866</sup>. El de Málaga también sería redactado por Rodrigo Amador de los Ríos, a raíz de la Real Orden de 22 de enero de 1906. En el caso de Sevilla, a propuesta de la Comisión de Monumentos de Sevilla, el Catálogo sería encargado al arquitecto restaurador de la Giralda, Adolfo Fernández Casanova, el 21 de mayo de 1907, siendo firmado por el Rey su nombramiento el 21 de junio. El 15 de junio de 1908 pediría el arquitecto una prórroga, que posiblemente se le concedieron ya que no entregaría la obra terminada hasta 1910. La propia Comisión emitiría un Informe favorable firmado por Garrido y el Conde de Cedillo, enviándose al Ministerio los seis tomos, tres de textos y tres de fotografías que compondrían la obra definitiva, siendo aprobado por el Rey el 9 de mayo de 1910<sup>2867</sup>.

No todas las catalogaciones presentaban el mismo rigor científico. Se criticó el hecho de que solamente había sido encargada la labor técnica a Manuel Gómez-Moreno, por lo que se decidió dividir el trabajo entre varios especialistas, que dispersa el rigor técnico de la elaboración del Inventario, como la desigualdad de criterios en la recopilación de datos. Sin embargo, como apunta Gratiano Nietointrigas y cabildeos en cuyos pormenores no vale la pena de entrar, echaron por tierra lo que, bajo tan buenos auspicios, había comenzado. A consecuencia de ellos, se encargó la redacción de Catálogos de otras provincias, unas veces a personas solventes científicamente, pero las más a amigos políticos sin competencia ni preparación, lo que dio lugar a que la mayor parte de los

---

<sup>2865</sup> CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús *Estudio Introductorio del Catálogo de Huelva de 1909*. Huelva, 1998. p.23-24.

<sup>2866</sup> AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo *Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva*. Madrid, 1909; (ed.1998), p.101.

<sup>2867</sup> LOPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia, 2010, pp.33-34.



*volúmenes redactados no pudieron ser aprovechados*<sup>2868</sup>. El historiador Miguel Ángel López Trujillo recoge la corruptela que existía en este momento en torno a la catalogación: *Diez mil pesetas por catálogos era lo que cobraban sus autores, un sueldo más que generoso y toda una tentación para que burócratas corruptos favoreciesen a su círculo de amistades. El caso más escandaloso fue precisamente el del primer volumen, Ávila, publicado en 1915. Su autor fue el periodista Cristóbal de Castro, quien a pesar de su ineptitud científica obtuvo gracias a su influencia –llegó a ser gobernador civil– el encargo de seis provincias más, dos más incluso que Gómez Moreno*<sup>2869</sup>. Muy crítico fue el artículo de Tormo publicado en 1916 con el título *Acerca del inventario monumental de Álava, y vergüenzas nacionales ante unos actos de impiedad histórica*<sup>2870</sup>. Al mismo tiempo, el arquitecto Leopoldo Torres Balbas durante la celebración del VII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Zaragoza en 1919, exclamaría: *Concedidos los de las 49 provincias españolas y entregados casi todos, al lado de unos cuantos hechos por personas competentes, la mayoría son obras de periodistas y amigos de políticos desconocedores en absoluto de nuestro arte antiguo, a los que se les concedió el favor oficial con la complicidad de una comisión que piadosamente deseamos creer incompetente*<sup>2871</sup>.

A la hora de elaborar la catalogación de los monumentos se fue delimitando la conceptualización de los mismos, siendo en algunas circulares de las Comisiones de Monumentos donde aparecerían delimitándose cuales eran los bienes muebles e inmuebles que debían ser catalogados. En la **Circular enviada por la Comisión de Monumentos de Huelva a los Alcaldes de la provincia**, con el objeto de elaborar el catálogo de los Monumentos de la provincia, insertada en el Boletín Oficial de la provincia de Huelva, fechable en **el 21 de noviembre de 1905**, dividiría los Monumentos en dos clases: Artísticos e históricos. Serían incluidos como artísticos, los edificios antiguos pertenecientes a un estilo arquitectónico determinado, dentro de las distintas época de la historia patria y además los cuadros, estatuas, entalladuras, bordados, dibujos, obras de platería, miniaturas, camafeos, medallas y monedas, en una palabra, todos los productos de las artes del dibujo, arquitectura, pintura y escultura y sus derivadas, las artes industriales o sean las industrias que no pueden existir sin la aplicación del dibujo, mientras que serían clasificados como Monumentos históricos, las ruinas de ciudades y edificios antiguos, los restos de fortificaciones militares, los acueductos, cementerios, teatros y anfiteatros de épocas remotas, las inscripciones ibéricas, romanas, visigodas, árabes o de la edad media, todos los restos de armas y utensilios prehistóricos y las estaciones en que estos se encuentran, así como

<sup>2868</sup> NIETO GALLO, Gratiniano, Prólogo del Catálogo Monumental de la provincia de Salamanca, elaborado por Manuel Gómez Moreno, Salamanca, 2003, p.XVI.

<sup>2869</sup> LOPEZ TRUJILLO, M., 2006, pp.326-327.

<sup>2870</sup> TORMO, Elías “Una nota bibliográfica... y algo más: Acerca del Inventario Monumental de Álava, y vergüenzas nacionales ante unos actos de impiedad histórica”, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, Tomo 23-24 (1915-1916), pp.152-160.

<sup>2871</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo, 1989, pp.195-210.

los objetos de cerámica primitiva y de las otras épocas citadas, además de los manuscritos y libros impresos que traten de historia o sirvan para esclarecer hechos históricos y los demás documentos antiguos acumulados en los archivos, tanto civiles como eclesiásticos. En la propia Circular se instaba al apoyo de los alcaldes de las distintas localidades de la provincia para que pudiera confeccionarse el catálogo: *Impotente resultaría la Comisión e inútil su trabajo, si para hacer esta catalogación, no le prestasen auxilio los señores alcaldes de esta provincia, asociándose en sus respectivas localidades con los señores curas párrocos, maestros de instrucción primaria y con las personas que en cada pueblo haya peritos y amantes del saber y de la investigación, quienes podrán reunirse, cambiar impresiones, comunicándose entre sí las noticias que cada uno tenga de los restos y objetos existentes en cada pueblo y en cada término, dignos de conservación y de estudio, y los señores alcaldes comunicarán a esta Comisión provincial, un avance de catálogo en que consignen los objetos que crean dignos de ello para que estudiados después por los señores de la Comisión, se clasifiquen y se publiquen y lleguen a su conocimiento a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando primero, y más tarde a los españoles amantes de los estudios históricos y arqueológicos.*

Cabe reseñar como a la hora de elaborar el catálogo se tendría en cuenta entre aquellos que formaban parte de la propiedad pública y los que estaban incluidos en el dominio privado, por lo que se precisaba como los alcaldes debían de dar una relación de los edificios públicos civiles y eclesiásticos de carácter artístico o de gran antigüedad acompañada de fotografías o dibujos a ser posible y si no, de una descripción más o menos completa y circunstanciada y expresando el estado de conservación en que se hallen, por lo que se sobreentendían que no serían incluidos aquellos inmuebles de propiedad privada que tuviese interés histórico y artístico. Entre los bienes muebles se incluirían la relación de cuantos fragmentos de lápidas, estatuas, columnas miliarias, sarcófagos, vasos y otros objetos de antigüedad se hallen en el término jurisdiccional acompañados también de los dibujos y fotografías que se pudieran proporcionar, precisando que *los objetos de este carácter que pertenezcan al común, deberán enviarlos para la formación del Museo, y si pertenecieran a particulares, les invitarán a donarlos para el Museo, aunque sea con el carácter de depósito haciendo ver a los poseedores, la utilidad que de tal donativo resultará al estudio de la historia de esta provincia.* Al mismo tiempo se incluirían la relación, si pudiera ser con fotografías o dibujos, de los cuadros en lienzo o tabla, estatuas, libros iluminados, bordados, alhajas, herrajes y demás objetos artísticos de reconocida belleza que se guarden en las Iglesias y lugares públicos y que se deban conservar para su estudio, además que para el culto, no incluyendo nuevamente a los pertenecientes a los particulares. Como excepción podemos apreciar el trato igualitario que se le daría a los documentos pertenecientes a las Corporaciones Públicas y a los particulares, al incluir entre los bienes catalogables la *relación de las reales cédulas y cartas, ordenamientos, escrituras y toda clase de manuscritos antiguos que puedan tener interés para la historia general de España o para la particular de la provincia o del pueblo donde se encuentren, ya estén en archivos, ya*

*en poder de particulares, y cuyas copias se podrán hacer así que esta Comisión los clasifique y vea si son merecedoras de publicidad.* Para paliar las dificultades administrativas que fueron surgiendo a la hora de elaborar los distintos catálogos de monumentos una serie de disposiciones legales que en la mayor parte de los casos no dieron el resultado esperado

## **9.2. La publicación de inventarios parciales de Monumentos Arquitectónicos.**

Desde los sectores más eruditos se harían algunas propuestas, como la presentada por el arquitecto Lampérez en el VI Congreso Nacional de Arquitectos, celebrado en Bilbao, en 1907, defendiendo la necesidad de realizar listados, aunque exclusivamente a los monumentos arquitectónicos, por el que debería de constar de dos partes, una primera, en la que contendría todos los monumentos que existieran, con los correspondientes datos de clasificación, descripción técnica, historia y emplazamiento de cada monumento, y una segunda, por la que contendría un estudio detallado con abundancia de datos gráficos de los mismos, por lo que por necesidad práctica y económica en un primer momento debía acometerse solamente el listado, siendo los arquitectos provinciales y diocesanos los que debían realizar este trabajo. A la hora de elaborar este listado se haría en base a las noticias que se hubieran obtenidos, formando un estado resumen al finalizar cada año, siendo revisado por la Comisión Central de Monumentos, que podría ampliarlo o corregirlos, que debería ser publicado por las Diputaciones o Prelados. Los inventarios parciales deberían remitirse a la Comisión Central de Monumental, para que gestionase la segunda parte del trabajo, o sea el estudio monográfico de los monumentos que lo merezcan por su importancia y valor histórico artístico<sup>2872</sup>. Muy en la línea de la propuesta de Lamperez se encontraría la Real orden de 20 de marzo de 1911, por el que se instaba a la publicación abreviada de algunos Catálogos Monumentales, ante la necesidad la necesidad perentoria de conocer a los bienes que debían de ser conservados por el Estado, pero ralentizado por problemas económicos, como así queda reflejado en los términos de la propia disposición: *Es de tanta importancia el conocer en España y dar a conocer en el extranjero nuestro Tesoro nacional histórico y artístico, que todo esfuerzo para lograrlo debe parecer siempre insuficiente. Por eso la plausible iniciativa de Ministerio anteriores de instrucción pública dispuso la formación de Catálogos provinciales, de los cuales hay ya terminados 17, a pesar de los escasos recursos a que este fin ha asignado los presupuestos del Estado. Es cierto que lo primero es formarlos, pero no lo es menos que si después de formarlos se archivan, en vez de ser obra útil para la cultura pública, se reduciría a documentos de curiosidad para personalidades privilegiadas. Publicar los trabajos ya hechos debe ser ahora preocupación inexcusable, pero esas publicaciones en la forma emprendida como ensayo son costosísimas, y para ello se carece en actualidad de medios económicos. No hay, pues, otra manera de conciliar extremos tan opuestos, que dar*

<sup>2872</sup> LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente Bases y medios prácticos para hacer el inventario de los monumentos arquitectónicos de España IV Congreso de Arquitectos, Bilbao, 1907.

*inmediatamente a la publicidad, si no a los catálogos, sus índices, de suerte que aparezcan descritas, siquiera sea lacónicamente, las obras catalogadas. De esta manera se dispondría que la Comisión Mixta organizadora de las provinciales de Monumentos, ya especialmente encargada de este servicio, se proceda a la publicación en firma abreviada de los catálogos por ella aprobados, comenzando por el de la provincia de Salamanca.*

### **9.3. La elaboración de los inventarios de los bienes de interés histórico y artístico por los Delegados Regios provinciales de Bellas Artes a raíz del Real decreto de 10 de octubre de 1919.**

Un nuevo paso en la institucionalización administrativa sobre la tutela pública del Patrimonio Monumental fue la creación del cargo del Delegado Regio Provincial de Bellas Artes a raíz de la promulgación del **Real decreto de 10 de octubre de 1919**. La importancia del valor del pasado como configuración de la identidad de los pueblos seguirían siendo el fundamento de toda política institucional de un Estado Moderno, como así aparecía reflejado en la Exposición de Motivos: *Es preocupación constante de los Gobiernos que el ansia de renovación y progreso, norma de las futuras orientaciones de nuestro país, el afán de buscar nuevos cauces a las energías que han de seguir el camino marcado por el imperio de la vida misma, vaya acompañado de un mayor respeto, de un santo amor a las glorias pretéritas, a los caudales de ciencia y de arte que acumularon, como comprendió del trabajo de las generaciones pasadas, los maestros del saber y los cultivadores admirables de las artes todas. Es nuestro solar rico depósito donde se guardan las manifestaciones más puras de los tiempos pasados, que a las glorias netamente españolas se unieron por las vicisitudes de la historia la de aquellos pueblos que, al pasar por la Península, si no pudieron borrar el espíritu nacional, dejaron la huella de su paso en aquellas modalidades de su espíritu que supieron traducir en los monumentos, en los cuadros, en las tallas, en los manuscritos, en las manifestaciones de las artes que, repartidas por España, transforman en un museo, de valor inestimable, el mismo territorio nacional. Del mismo modo era una preocupación vital de todo Estado la realidad de un peligro que cada vez acusa con mayor fuerza: el de la paulatina desaparición de aquella riqueza artística, el de una emigración de valores que es preciso atajar. Para atajar esta problemática debía de ser proyectada una verdadera legislación protectora, por lo que había llegado el momento de dar unidad a muchas disposiciones dispersas, dictar otras de más positiva eficacia y de lograr, en fin, una legislación definida por medio de un proyecto de ley de protección a las artes, que evite aquellos peligros y haga posible la verdadera nacionalización de las joyas artísticas que guardan nuestro territorio. Uno de los obstáculos firmes a la hora de proyectar una verdadera legislación sería la catalogar aquellos bienes que se querrían tutelar, como de esta manera había ocurrido en la legislación extranjera de Bellas Artes, especialmente la italiana y la francesa, afirmándose que serían las limitaciones de propiedad, todo lo que constituye el nervio del asunto. El conocimiento de los bienes y la tutela de los mismos serían los principios primordiales que fundamentaría esta disposición: Lo primero que es preciso para evitar la pérdida de las joyas artísticas, su deterioro, y su salida de España es el conocimiento exacto de cuáles son, en qué consisten, y,*

*hasta dentro de lo posible, cuál es su valor verdadero. Y después de este conocimiento, son precisos la vigilancia constante, el cuidado exquisito para evitar o aminorar, a lo menos, los efectos de la codicia unas veces, y casi siempre de la necesidad. La creación del cargo de Delegado Regio de Bellas Artes se convierte en una verdadera respuesta legal, que como quedaba reflejado en la Exposición de Motivos pretendía (...) buscar, para darles forma, la colaboración de un puñado de hombres de buena voluntad, de espíritus cultivados no sólo por el estudio y la contemplación de la belleza, sino por el imperio de ese mismo amor que han de despertar en el alma de las multitudes. No se va con este Decreto a la creación de oficinas ni centros, sino sólo a dar oficial representación, realidad como organismos propios vivos de la obra que se emprenda, a quienes por sus actos anteriores, por sus pruebas de amor a la cultura, al arte y a la patria, puedan llevar toda la eficacia de su colaboración entusiasta a la obra futura.*

La elaboración de un Inventario en cada provincia sería la función primordial de los Delegados Regios (art.2.1), a los que se uniría como complementaria de lo anterior llevar a efecto cuantas investigaciones fueran compatibles con los derechos reconocidos por la Legislación y llevar al conocimiento de las modificaciones, deterioros, restauraciones mal entendidas, enajenaciones y exportaciones de que pudieran ser objeto las obras de arte, que una vez conocidas las pondrían en conocimiento de la Dirección general de Bellas Arte (art.2.2) y procurar por todos los medios posibles cultivar el espíritu artístico, y el amor a las manifestaciones de la cultura en todos los ciudadanos, dando conferencia, provocando visitas colectivas, publicando artículos en prensa, buscando la colaboración de entidades y particulares (art.2.3). El Inventario debería ser lo más completo posible, no limitándose a los monumentos, sino también a los cuadros, esculturas, tallas, libros y manuscritos, restos prehistóricos y primitivos y cuantas manifestaciones artísticas existieran en las localidades y en los edificios del Estado, de Corporaciones y particulares (art.3). Sin embargo, nuevamente el respeto del derecho de la propiedad privada quedaría respetado, como quedaba preceptuado en el artículo 4º al disponerse que *el inventario no tendría otra fuerza que la de servir de base de conocimiento, y, por tanto, no significa merma de ninguno de los derechos que hoy tengan los poseedores de las obras que figuren relacionados*. Los trabajos de inventario podrían verificarse parcialmente y ser enviados a la Dirección general de Bellas Artes conforme fueran realizándose, sin perjuicio de su posterior complemento, modificación y aún rectificación en virtud de los nuevos datos que se obtuvieran (art.5). Los inventarios parciales no serían publicados, conservándose a los oportunos efectos en la Sección correspondiente de la Dirección General de Bellas Artes (art.6). El cargo de los Delegados Regios, durante el ejercicio de su cargo, sería completamente gratuito, teniendo la consideración de Jefes superiores de Administración civil (art.9), reconociendo en la Exposición de Motivos que para su nombramiento *por lo delicado de sus gestiones exigen una labor depurada de selección, y por lo mismo que supone un esfuerzo y un sacrificio, es necesario conocer*



*no sólo las aptitudes, sino la vocación, el desinterés de quienes hayan de ocuparlos. Del mismo modo serían nombrados como Delegados Regios quienes realizaron trabajos aislados por un solo esfuerzo, aquellos que llevaron a cabo en cada provincia la oscura labor de ir clasificando las obras artísticas, quienes tengan vocación y estén preparados para realizarla, sin otra recompensa que la inmediata de dar eficacia a sus trabajos y la más lejana, pero más pura de haber contribuido a una obra protectora, la de la conservación de la riqueza artística española. Cabe mencionar que en la provincia de Sevilla sería nombrado como Delegado Regio a D. Francisco Murillo Herrera, que por Real orden de 5 de diciembre de 1919 dimitiría de su cargo, siendo sustituido por Real de 5 de diciembre de 1919, a Don Andrés Parladé y Heredia.*

#### **9.4. Un intento de revisión de los Catálogos Monumentales: La creación de una Comisión especial de la Real Academia de Bellas Artes. Real Orden de 24 de febrero de 1922.**

Un intento de revisión de los Catálogos Monumentales lo constituiría la promulgación de la Real Orden de 24 de febrero de 1922, *a fin de señalar cuáles pueden ser editados desde luego y cuáles deben ser rectificadas o adicionados, como trámite indispensable a su publicación.* Y es que como así señalaba la Exposición de Motivos, desde la publicación del Real decreto de 1902, *en el largo tiempo transcurrido, al conocimiento de la riqueza monumental de nuestro país puede haberse y de hecho se ha aumentado, aportando el estudio constante nuevos datos sobre ella, o rectificando los que primero se aportaron y descubriéndose, por excavaciones científicas y metódicas, joyas artísticas dignas de figurar en los volúmenes de que se trata: la investigación histórica realiza cada día más profundos avances. Impónese, en una palabra, la necesidad de revisar los Catálogos antes de publicarlos y de incluir en ellos, lo mismo en su parte gráfica que en su redacción, cuanto no conste, por la fecha en que se ejecutaron. Por la índole especial y varia de los Catálogos, en los que ha de atenderse tanto al concepto como a la exposición literal, son las Academias las llamadas a realizar semejante labor modernizadora, dándoles así toda la autoridad definitiva que ha de prestarles el refrendo de tan doctas Corporaciones.* Se dispondría que habría que se haría una revisión detenida de los originales, a fin de señalar cuáles pueden ser editados desde luego y cuáles debían ser rectificadas o adicionados, como trámite indispensable a su publicación (art.1), para lo que sería encargada una Comisión especial compuesta de un Académico de la Real Academia de la Historia o de la de Bellas Artes de San Fernando todos designados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a propuesta en terna de los señores Académicos (art.2º), poniendo la Dirección general de Bellas Artes los Catálogos Monumentales a disposición de la Comisión de Académicos (art.3). La revisión comprendería la parte gráfica de cada Catálogo y su redacción, debiendo determinar el informe en esta labor crítica concretamente las omisiones que, a juicio de la Comisión fueran indispensables subsanar y los nuevos datos que fueran juzgados convenientes añadir (art.4). Los gastos que ocasionasen estos trabajos a la Comisión especial serían satisfechos con cargo

al Capítulo, artículo y concepto correspondientes del presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.5).

## **10. Los límites del tráfico de las obras de arte a principio del siglo XX.**

### **10.1. El derecho de venta por parte de los propietarios de los bienes muebles de interés histórico y artístico.**

La libre disposición de los bienes muebles de interés histórico y artístico por parte de sus propietarios va a seguir siendo un hecho en esta etapa<sup>2873</sup>. Un caso paradigmático podría ser la venta del cuadro *El Niño del Carnero*, de Goya, que se presentaría a subasta pública por 80.000 dólares en Nueva York, siendo objeto de mención en la sesión de 10 de julio de 1914 del Congreso, por el que el diputado Castrovido interpelló hasta qué punto el supuesto dueño tenía derecho a hacerlo, siendo contestado por Bergamín, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes refutando el derecho de venta por parte del propietario: *Este cuadro pertenecía en propiedad puramente particular y privada al señor Stuyk, y que ese señor lo había vendido en uso de su derecho hacía años. En la carta en que tal noticia se me comunicaba oficialmente se hacía una indicación: la de que los títulos a cuya virtud ese cuadro era de la propiedad privada de este señor (...) aprovecho la ocasión para decir que la confusión ha podido determinarse por una que está muy generalizada (...) Como se trata de la Real Fábrica de Tapices y con tal nombre esa fábrica figura, muchos hay que entienden que esa fábrica está industrialmente explotada por el Patrimonio de la Corona, y no es así. El Patrimonio de la Corona tiene la propiedad del edificio y tuvo, en su tiempo, la propiedad industrial; pero cuando dejó de ser industrial la Casa Real, cedió en arrendamiento la marca de fábrica y el edificio a los señores que actualmente lo tienen por virtud de un contrato puramente privado. De suerte que no hay conexión absolutamente ninguna más que esa, la relación jurídica entre el dueño que arrienda y el arrendatario que paga su renta, entre la Fábrica Real de Tapices y el Patrimonio de la Corona. De ese arrendatario, particularmente suyo, es el cuadro. De modo que para mí (...) en la titulación de la propiedad privada, de ese cuadro, hoy el hecho y el derecho es que, perteneciendo al Sr. Stuyk, hace años se lo vendió, en efecto, a un súbdito norteamericano*<sup>2874</sup>.

Un ejemplo significativo de ello lo constituye la adquisición de obras de arte españolas por parte de los magnates americanos en los primeros decenios del siglo XX. El reciente estudio realizado por María José Martínez Ruiz nos acerca al amplio número de obras de arte de origen español que fue objeto del tráfico comercial norteamericano: *Es bien conocida la gran afluencia de antigüedades de origen español a Estados Unidos a comienzos del siglo XX, principalmente durante los años veinte. Fue, sin lugar a dudas, la edad de oro del coleccionismo norteamericano y de la gestación de los grandes museos que en España*

<sup>2873</sup> ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO, M<sup>a</sup> Dolores, 1994, pp.391-396.

<sup>2874</sup> Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso. Núm.72, Sesión de 10 de julio de 1914, pp.72-73.

*se corresponde, por el contra, con una época marcada por el despojo artístico (...) Con la desmoralización heredada de la crisis finisecular, tras la pérdida de las últimas colonias, la guerra de Cuba marcó el signo de la relación de los Estados Unidos en esas primeras décadas del siglo. La posición española ante la joven y pujante nación osciló entre la asunción de su inferioridad y el rechazo de la misma tratando de refugiarse en la contemplación romántica de sus viejas glorias. En esta tesitura, cuando los dólares empezaron a rebañar los restos históricos-artísticos del país –vestigios habitualmente abandonados y en la mayoría de las ocasiones desatendidos-, los más se frotaron las manos al descubrir las lucrativas posibilidades del mercadeo con lo viejo, y los menos se llevaron las manos a la cabeza clamando en la prensa o en las Cortes, como quien clama en el desierto, por el descrédito de una nación que vendía sin pudor la herencia cultural de un brillante pasado. Algunos hicieron de la venta y exportación de obras de arte con destino a Estados Unidos el negocio de su vida. Esta fue la senda seguida no solo por anticuarios reconocidos como tales, sino también por otros personajes de relevante posición social: coleccionistas, mecenas de arte, estudiosos e incluso altos cargos de la administración, para los cuales la venta y exportación de obras de arte constituyó una actividad muy rentable que deliberadamente procuraron ocultar (...) ¿Era posible, de acuerdo al marco legal y administrativo del momento, desvalijar el patrimonio cultural del país? Digamos que desde un punto de vista teórico no, pero de facto sí. Con una legislación en materia de tesoro artístico insuficiente y con bastantes lagunas dignamente aprovechadas por los comerciantes de antigüedades, casi todo era posible. Bien es cierto que durante la década de los veinte se tomaron ciertas medidas en un intento de poner coto a tan suculento negocio, pero uno de los principales problemas de cara a la protección del patrimonio, siempre respetuosas con el libre ejercicio de la propiedad privada, sino el escaso cumplimiento de las mismas. Podemos expresarlo de otro modo: muchas veces los responsables de hacer cumplir tales medidas desatendieron su labor, miraron hacia otro lado, o incluso facilitaron el negocio. En este sentido, desde cualquier alto cargo en el Ministerio de Instrucción Pública hasta el último funcionario de aduanas podía cumplir un importante papel en el proceso de expolio artístico. El sistema caciquil, las clientelas políticas y las prebendas lo hicieron posible<sup>2875</sup>. Juan Riaño y Gayangos (1865-1939), diplomático español en Estados Unidos sería el encargado de intermediar la venta de un gran número de obras de arte hispanas a los magnates americanos. En 1915 Juan Riaño medió ante el Gobierno a raíz de la supuesta venta del patio de la casa Miranda de Burgos, cuyo propietario, Hermenegildo Barbero pretendía venderlo fuera del país, enfrentándose a una amplia protección, especialmente de Elías Tormo que llevaría el caso a las propias Cortes, donde haría un alegato a favor de la titularidad pública del Patrimonio Histórico Artístico frente al derecho absoluto de la propiedad privada. Al mismo tiempo la incoación de expediente para la declaración del palacio como monumento nacional obstaculizaría aún más la salida del patio burgalés a manos americanas. La enajenación del patio llegaría a los tribunales,*

---

<sup>2875</sup> MARTINEZ RUIZ, M.J. “La diplomacia española y estadounidense y su relación con el comercio de antigüedades en la primera mitad del siglo XX” en *Goya*, 329, octubre-diciembre, 2009, pp.328-330.

y en primera instancia, e incluso en el Supremo, los jueces dictaron sentencia a favor de la venta. A pesar de ello, las dificultades que el hecho de haber sido declarado monumento nacional, por Real Orden del 17 de octubre de 1914, que aparecería publicado en la Gaceta de Madrid el 27 de este mismo mes, impedirían la venta definitiva<sup>2876</sup>. Actualmente la Casa de Miranda se ha convertido en la sede del Museo de Burgos.

### **10.2. Los aranceles aduaneros como límite en la libre disposición del propietario del bien de interés histórico y artístico.**

En el **Real decreto de 11 de marzo de 1913** se regularía la circulación de la plata, que había sido establecida por Real orden de 17 de agosto de 1908, distinguiéndose la plata pura o aleada con los objetos de arte o alhajas, por el que el artículo 1.1. se establecía que *la plata pura o aleada, en pasta, hilo u otra forma, que no constituya alhaja ni objeto artístico o de comodidad o aseo, no podrá circular sin que la acompañe la correspondiente guía, cualquiera que sea la cantidad*, precisándose en el párrafo 2 que *la plata en alhajas u objetos artísticos o de comodidad o aseo también necesitarán para su circulación ir acompañados de guía, siempre que el peso de la cantidad que circula exceda de un kilogramo*, a lo que se añadiría que *aquellas personas que por su posición social, y como objeto de lujo tengan vajillas de plata y objetos artísticos, así como los de comodidad o aseo, y las Corporaciones Civiles y religiosas que posean objetos artísticos podrán conservarlos sin proveerse de guías, pero éstas les será indispensable para la circulación*. Se establecía a su vez una distinción sobre los objetos artísticos de plata, como se precisaba en el artículo 5º en el que se precisaba que los destinatarios o receptores de la plata, que no fuera objetos artísticos, vajillas que se importe debían de llevar cuenta corriente de su inversión y en el artículo 6º se establecía que el receptor o consignatario de la plata que se importe debería inscribirse en la matrícula industrial con la excepción de los particulares que hicieran las importaciones en vajillas y objetos artísticos<sup>2877</sup>.

**En el Real decreto de 16 de febrero de 1922** relativo a la exportación de objetos artísticos y la creación de Comisiones de Valoración de referidos objetos se dispondría que los exportadores de objetos artísticos comprendidos en la partida 35 del Arancel de exportación de 12 del corriente mes debería presentar en las Aduanas habilitada al efecto para esta clase de despachos el documento, que acredite el valor oficial, a los efectos de la liquidación de los derechos (art.1), habilitándose para ello únicamente los despachos de Aduanas de Barcelona, Port Bou, Irún, Bilbao, Cádiz, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca (art.2). Como novedad serían creadas las Comisiones de Valoración

<sup>2876</sup> MARTINEZ RUIZ, M.J. “La Casa Miranda de Burgos. La defensa ante la posible salida al extranjero de su patio” *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, 66, Valladolid, 2000, pp.182-197; *la enajenación del patrimonio de Castilla y León (1900-1936)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 2008, pp.51-61.

<sup>2877</sup> Colección legislativa de España, Tomo , pp.413-416; Gaceta de Madrid, 14 de marzo de 1913.

de objetos artísticos, formadas por personas de reconocida competencia y designadas por los Ministros de Hacienda e Instrucción Pública y Bellas Artes. Estas Comisiones estarían constituidas por cuatro individuos, dos por cada Ministerio, los cuales examinarán los objetos que se presenten a valoración, y certificarán si merecen la consideración de artísticos, y en el caso de considerarlos como tales, el valor que a su juicio corresponda, en el documento dictamen que servirá de base para el adeudo. En caso de discrepancia, la Comisión lo notificaría al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el cual designará la persona técnica que haya de dirimir el desacuerdo (art.3). Estas Comisiones se establecerían en Madrid, para la exportación por cualquiera de las Aduanas habilitadas; en Barcelona, para la salida por el puerto de Barcelona y por la Aduana terrestre de Port-Bou; en San Sebastián, para la exportación por mar por el puerto de Bilbao y por tierra por la Aduana de Irún; en Valencia, para salida por su puerto; en Sevilla, para la exportación por Sevilla o Cádiz, y en Palma de Mallorca, para la exportación por su puerto de cuanto afecte a las Islas Baleares (art.4). La exportación a los puertos francos de las Islas Canarias y Norte de África serían considerados realizadas al extranjero, dado su carácter y condición especial, según la ley de Puertos francos de 6 de marzo de 1900 (art.5).

Ante de formalizar su dictamen de valoración, las Comisiones debían de dar cuenta al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, presentada por los exportadores o sus representantes de los objetos artísticos que pretendan exportar, por si dicho Ministerio estimase conveniente designar persona competente que pudiera examinarlos, y en su caso, señalar con la Comisión la valoración que correspondiera. De igual modo podría proponer al Ministerio, el nombramiento de dicha persona competente en los casos que lo estimen conveniente (art.6). Sería establecido un claro procedimiento formal por el que quedaban obligado a los exportadores presentar a la Comisión de referencia en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián o Palma de Mallorca el objeto u objetos que pretendieran sacar de la Península o Islas Baleares, acompañando doble copia fotográfica, de tamaño y detalles bastantes, a juicio de la Comisión, para que no deje lugar a duda de que se trata del objeto reproducido por ella, y relación duplicada y detallada del objeto u objetos, indicando clase, materia, peso, representación y demás características de precisión que le correspondieran. Una de las reproducciones fotográficas quedaría en poder de la Comisión, con el duplicado de la declaración y nota de características, y la remitiría con índice especial, en pliego certificado, por correo oficial e inmediatamente al Negociado de Valoraciones de la Dirección general de Aduanas. Las Comisiones tomarían, además, todas las precauciones que les sugiriese su buen celo para evitar la sustitución una de las reproducciones fotográficas quedará en poder de la Comisión, con el duplicado de la declaración y nota de características, y la otra acompañará al certificado de salida unidos de manera que no pudieran separarse, sin evidentes



manifestación de los objetos artísticos cuya exportación se hubiera solicitado (art.7). Al mismo tiempo se aplicaría las reglas establecidas por los artículos 133 a 137 de las Ordenanzas de Aduanas para el despacho de equipajes de viajeros en el régimen de importación, en el caso de salida por puertos y fronteras para evitar la exportación clandestina de objetos artísticos, siempre que las Administraciones de Aduanas, por sospecha o causa semejante, estimasen necesario el reconocimiento de los equipajes, bultos o maletas a la salida de la Península e Islas Baleares (art.8.1). De la misma manera se actuaría en los reconocimientos que se realizarían para el comercio de exportación y el de cabotaje de salida, con la misma salvedad expresada (art.8.2).

Unos meses después serían nombrados por **Real orden de 18 de julio de 1922** los representantes del Ministerio de Hacienda para las Comisiones de Valoraciones de objetos artísticos que se exportase, distinguiéndose los nombrados por el propio Ministerio de Hacienda como fueron los casos de las Comisiones tasadoras de exportación de obras artísticas en San Sebastián, Cádiz, Sevilla, Madrid Palma de Mallorca y Barcelona, y los nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública, como fueron los casos de Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Palma de Mallorca y Barcelona. En el caso de Sevilla, los representantes nombrados por el Ministerio de Hacienda serían José Muñoz San Román, Académico de la de Buenas Letras, escritor periodista y Concejal del Ayuntamiento y Sebastián Bandarán, Académico de la de Buenas Letras y Bellas Artes de Sevilla y los nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública, entre los que se encontrarían Gonzalo Bilbao, Académico de la de Bellas Artes de Sevilla y correspondiente de la de San Fernando; Cayetano Sánchez Pineda, Académico de la de Bellas Artes de Sevilla y Correspondiente de la de San Fernando; Pelayo Quintero, Director del Museo de Bellas Artes, Delegado Regio de Bellas Artes y Catedrático y Alvaro Picardo Gómez. Poco tiempo después dimitirían de sus cargos D. Gonzalo Bilbao y D. Cayetano Sánchez Pineda de los cargos de representantes de este Ministerio en la Comisión constituida en Sevilla para la valoración de objetos artísticos destinados a la exportación, siendo aceptada su dimisión por la Real orden de 6 de abril de 1923. En sustitución serían nombrados por la Real orden de 10 de mayo de 1923 a Andrés Parladé, Conde de Aguiar y a José Sebastián y Bandarán.

Un paso importante en la regulación de la exportación de la obra de arte lo va a representar la promulgación de la **Real orden de 29 de agosto de 1922** al disponer que fueran considerados como objetos artísticos, que en su artículo 1º preceptuaría como tales, *a los efectos de la prohibición señaladas en el Arancel de exportación, todos aquellos, tanto de la propiedad del Estado como de Corporaciones o particulares, que por su antigüedad, mérito artístico o especiales condiciones, deban ser conservadas en el país; y se estimarán como autorizadas a la exportación las imitaciones y aquellas otros cuya salida no puede causar el menor*

*daño a la riqueza artística española*(art.1). Las Comisiones creadas por el Real decreto de 16 de febrero serían las encargadas de la calificación correspondiente, y su función se concretaría a certificar si los objetos que se le presentasen pudieran exportarse o fueran de aquellos cuya exportación estuviera prohibida (art.2), por lo que las Aduanas no podrían permitir la salida de comercio de objetos artísticos de ninguna clase ni de sus imitaciones, sin que fuese acompañado la autorización correspondiente librada por las Comisiones de referencia (art.3). Al igual que en el Real decreto de 16 de febrero de 1922, se insta un procedimiento administrativo, por lo que todo exportador de los objetos tendría que presentar a la respectiva Comisión en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián o Palma de Mallorca, el objeto u objeto que pretendiera sacar de la Península e Islas Baleares, acompañando doble copia fotográfica de tamaño y detalles bastantes, a juicio de la Comisión, para que no dejare lugar a dudas de que se trataba del objeto reproducido por ella, y relación duplicada y detallada del objeto u objetos, indicando clase, materia, peso, representación y demás características de precisión que le corresponda. Una de las reproducciones fotográficas debería quedar en poder de la Comisión, con el duplicado de la declaración y nota de características, y la otra acompañará al certificado de salida unidos de manera que no pudieran separarse, sin evidentes manifestaciones de ello, y solamente a su presentación podrán ser despachados de salida por las Aduanas habilitadas, que unirían a la factura principal el certificado, reproducción fotográfica y nota de características para su remisión, con índice especial y en pliego certificado a la Dirección general. Los duplicados de las declaraciones, nota y fotografías que quedasen en poder de las Comisiones, serían numerados, registradas y clasificadas por éstas, dando cuenta de ello, así como de los certificados que expidan, al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Las Comisiones tomarían todas las precauciones que les sugiera su buen celo para evitar las sustituciones de objetos artísticos cuya exportación se solicitase (art.4). Cuando los objetos presentados a la Comisión correspondan a aquellos cuya exportación está prohibida, lo manifestarán así a los interesados, recogiendo las copias fotográficas, declaración y nota de características que remitirán respectivamente a las Direcciones generales de Aduana y Bellas Artes, a los efectos que correspondan y medidas que estimen oportuno adoptar (art.5). Se incluía un procedimiento sancionador, por lo que en cualquier Aduana en la que se presentasen objetos artísticos o sus imitaciones sin el certificado de la Comisión respectiva, procederían seguidamente a su detención, dando cuenta inmediatamente a la Dirección general. Si los objetos estuviesen ocultos serán aprehendidos y se incoará el procedimiento de contrabando correspondiente, quedando subsistente la facultad de reconocimiento a que se refiere el artículo 8º del Real decreto de 16 de febrero último (art.6). Las Aduanas habilitadas para la salida de objetos artísticos serían las de Barcelona, Port-Bou, Irún, Bilbao, Cádiz, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca únicamente; y las Comisiones quedarán establecidas y funcionarán en las capitales indicadas en

el mencionado real decreto, concretamente en su artículo 4º (art.7). Serían considerados como realizados al extranjero la exportación a los puertos francos de las islas Canarias y Norte de Africa (art.8). Antes de formular sus dictámenes, las Comisiones quedarían obligadas a dar cuenta al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de las declaraciones que fuesen presentados por los exportadores o sus representados de los objetos que pretendieran exportar, por si dicho Ministerio estimase conveniente designar persona competente que pueda examinarlos y emitir su dictamen. De igual modo se podría proponer al Ministerio el nombramiento de persona competente en los casos que considerasen oportunos (art.9).

Unos meses después sería promulgado como complemento del anterior, **la Real orden de 8 de noviembre de 1922** dictando reglas acerca de la exportación de objetos artísticos, que como así se incluía en la Exposición de Motivos se imponía *la necesidad de dictar reglas precisas de procedimiento para la más fácil ejecución de los preceptos que en ella se establecen*, así como de que las Comisiones valoradoras, carecieran de domicilio oficial propia, por lo que el exportador no sabía adónde dirigirse, ni la forma en que haya de hacerlo, por lo que era necesario, por tanto, señalar un centro de recepción públicamente conocido, y a la vez unificar el funcionamiento de las Comisiones, no sólo en sus relaciones con el público, sino con la Dirección general de Bellas Artes, para que pudieran conocer al detalle el movimiento de exportación artística condicional que ya se indicaba en el Real decreto y Real orden antes citado. Como respuesta legal a estas lagunas procedimentales se establecería un verdadero procedimiento administrativo que tenía que acogerse el exportador. Así, toda persona que deseara exportar objetos de arte debía solicitarlo en instancia dirigida al Presidente de la Comisión de la localidad por donde pretenda exportarlos, de entre las habilitadas a tal efecto por el Real decreto de 16 de febrero del año corriente. Esta instancia se redactaría en papel de una peseta, acompañando una póliza de dos pesetas para el correspondiente certificado, conforme a lo dispuesto en la ley de Timbre (art.1). Los exportadores a quienes conviniera acudir a la Comisión de Madrid, dirigirían su instancia a su Presidente en las mismas condiciones que se determinase en la regla anterior, especificando en la instancia la localidad por donde desean realizar la exportación, para hacerlo constar así en el certificado de autorización que se les extienda (art.2). En las provincias destinadas a la exportación, o sea en Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, San Sebastián y Valencia, las instancias para exportación se entregarían en el Registro de los respectivos Gobiernos civiles, remitiéndose por éstos con la brevedad posible, a los efectos que procedan al Secretario de la Comisión (art.3). Aquellas instancias destinadas a la Comisión de Madrid serían entregadas en el Registro del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, quien las remitiría a la Sección correspondiente de la Dirección general de Bellas Artes, para que ésta las trasladase al Secretario de la Comisión (art.4). Las Comisiones valoradoras

elegirían un Presidente y un Secretario, sin otras facultades que las de los dos restantes Vocales (art.5). En las instancias, los exportadores especificarían su cédula de vecindad, domicilio, localidad de salida y punto de destino, acompañando una relación por duplicado con unos específicos epígrafes en donde se debía de informar de los números de objetos a exportar, de la clase, de la materia en que estaban contruidos, las dimensiones, el peso, el nombre del autor imitado o del copista, si se trata de copia, y las correspondientes Fotografías, en número de tres: una para el certificado de exportación, otra para el Archivo de la Comisión valoradora y la tercera que se remitiría a la Dirección general de Bellas Artes en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para constituir el Registro general estadístico de exportación de objetos de arte de toda España (art.6). Una vez cumplidas todas las disposiciones del Real decreto de 16 de febrero de este año y la Real orden de 29 de agosto último, las Comisiones procederían a extender las certificaciones pertinentes dando cuenta de ello al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, al que remitirían copia del certificado, con la fotografía que se indica en la regla anterior, y de la relación explicatoria que acompaña a la instancia (art.7). Las Comisiones expondría su opinión razonadas respecto a la salida de los objetos que se les remiten para exportar (art.8). El certificado de exportación y las fotografías se recogerían por los interesados en Madrid, en la Sección de Fomento de las Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; y por lo que respecta a las Comisiones de provincias, donde mejor convenga a su Presidente (art.9).

Podemos decir que las disposiciones reguladoras de exportación de obras de arte, nacida en el seno de la regulación de las aduanas, serían en muchos casos aplicadas, aunque no dejaron de tener sus críticas, como fue el caso de la revista la Alhambra donde saldría publicado el 31 de octubre de 1922 un artículo titulado Trabas para la exportación. En muchos casos serían denegados los permisos de exportación, como así ocurrió con la solicitada por la Casa de Transporte Garrouste, de Madrid, que después de solicitar autorización al Ministerio para exportar por la Aduana de Irún un cuadro de la Escuela del Greco, titulado La Oración del Huerto, no se le concedería, como así recoge el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y es que en muchas ocasiones las denegaciones iban acompañada por la adquisición del propio Estado, como ocurrió en el caso aludido, y en el que podemos apreciar en el propio Informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como en la *propia Comisión de Valoraciones visitó la Casa Garrouste y vio el cuadro, y pudo comprobar que no sólo se trataba de la Escuela de El Greco, sino de un cuadro original en buen estado de conservación y firmado, siendo de alto interés artístico, y por consiguiente, comprendido en el tesoro nacional.* Por lo que la propia Comisión de Valoraciones, de oficio, precisaría *que siendo éste un caso excepcional y el primero que se le presenta, tiene que informar en sentido negativo la autorización pedida, significando la conveniencia de que dicha obra, por*

*su singular mérito, sea adquirida por el Estado.* Este oficio fue remitido a la Dirección general de Bellas Artes, el día 10 de marzo y en su virtud, el Ministerio dictó la Real orden del 15 de marzo de 1923 por lo que 1º) Se denegaba la autorización solicitada por la Casa de Transportes Garrouste, de Madrid, para la autorización del cuadro que se menciona; 2º) De esta resolución negativa se daría cuenta al Ministerio de Hacienda, para conocimiento de la Dirección general de Aduanas a los efectos correspondientes; y 3º) Se interesaba a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que informase a *este Ministerio en lo que respecta a la adquisición por el Estado de la obra que se trata, remitiendo la propuesta de compra formulada procedente del trámite de la misma*<sup>2878</sup>. Al igual que sería regulada en el ámbito de las disposiciones aduaneras las exportaciones de obras de arte, sería tutelada la admisión temporal de obras de arte fue objeto de una serie de disposiciones normativas, especialmente en una etapa en que se estaba fomentando las exposiciones temporales entre las galerías de arte y entre los propios Estados. Un caso interesante puede ser la promulgación de la Real orden de 11 de octubre de 1920 concediendo la admisión temporal de las obras de arte destinadas a la exposición que Mr. Fernando Fleuret organiza en la Galería Dalmau, de Barcelona. Una nota de la Embajada francesa comunicada por el Ministerio del Estado por Real orden en fecha 15 de septiembre, manifestaba que Mr. Fernando Fleuret, residente en París, iba a organizar en la Galería Dalmau, de Barcelona, una exposición de pintura moderna francesa, por lo que se pedía que fuera facilitado, en la medida de lo posible, las formalidades relativas, a la entrada de las obras de arte que a aquella exposición concurren y su regreso a Francia. Se notificaba como la admisión temporal de los objetos de exposiciones no organizadas por Corporaciones Oficiales, estaban reguladas por el caso 3º del artículo 144 de las Ordenanzas de Aduanas, en relación con el caso 6º de la disposición 3º del Arancel.

<sup>2878</sup> Informe acerca de la solicitud de la Casa de Transporte Garrouste, pidiendo autorización para exportar por la Aduana de Irún un cuadro de la escuela de El Greco, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Madrid, Núm.67, 30 de septiembre de 1923, pp.111-112.



---

***CAPITULO VII LA PROMULGACIÓN DE UN NUEVO ORDENAMIENTO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE ANTIGÜEDADES FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE EL RÉGIMEN DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930): EL DECRETO LEY DE 9 DE AGOSTO DE 1926***

---

La dictadura de Primo de Rivera ha sido considerada por la historiografía como una de las etapas más controvertida por parte de la historiografía española<sup>2879</sup>, punto final del régimen liberal en España que había sido introducido a raíz de la Restauración y epílogo del reinado de Alfonso XIII. Con el Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 se culminaba el proceso de construcción del Patrimonio Monumental como bien de interés público, en un momento en que los expolios de obras artísticas se habían incrementado. Sin embargo, probablemente no se le ha dado la consideración en la historiografía jurídica que va a representar en la evolución de la tutela del Patrimonio Monumental, aunque por parte de algunos autores se han ido destacando recientemente el impacto que pudo tener dicha legislación. De esta manera José Fariña destaca como *se trata de una norma de gran importancia, tanto por recoger los planteamientos más avanzados de la normativa anterior, como por incluir novedades importantes que se van a anticipar, incluso a la legislación europea en la materia*<sup>2880</sup>. Javier García Fernández por su parte afirma que *supuso una mejora en el régimen de protección tanto porque sistematizaba todas las previsiones normativas como por su intensidad y por su mejora conceptual y porque, además, vino a conectar con gran cuidado las técnicas urbanísticas con la protección de los bienes culturales*. Alfredo Pérez de Armiñan y de la Serna elogia en cierta manera la contribución que significó la Ley de 1926: *No obstante, si quiero dejar constancia el hecho de que la teoría de los bienes culturales tiene antecedentes en la propia legislación española anterior a 1985 sobre la conservación del Patrimonio – muy avanzada teóricamente para su época- a partir del artículo 1º del Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926 y, sobre todo, el artículo 45 de la constitución española de 1931. Ambos unificaban en buena medida el tratamiento jurídico de los distintos bienes que se contenían dentro del concepto genérico de Patrimonio o Tesoro Histórico-Artístico, al considerar que todos ellos eran dignos de ser conservados para la nación por razones de arte y de cultura (Decreto-Ley de 1926)(...). Es claro que estos preceptos proclamaban la existencia de un elemento común a todos los bienes que integraban ya entonces el Patrimonio, caracterizado por la función que aquellos cumplían, como testimonios del arte o de la historia, al servicio de la cultura y en beneficio de la comunidad nacional, con independencia de quien fuera su titular*<sup>2881</sup>.

---

<sup>2879</sup> Sobre el régimen de Miguel Primo de Rivera, GOMEZ NAVARRO, José Luis *El régimen de Primo de Rivera*, Madrid, 1991; AGUADO, Ana *La modernización de España (1917-1939)*, Síntesis, Madrid, 2002; GONZALEZ CALLEJAS, Eduardo *La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930*. Alianza Editorial, Madrid, 2005.

<sup>2880</sup> FARIÑA TOJO, José, 1996, p.39.

<sup>2881</sup> PEREZ DE ARMIÑAN Y DE LA SERNA, Alfredo “Una década de aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español” *Patrimonio Cultural y Derecho*, 1, Madrid, 1997, p.37.

Manuel José Arias, quien comenta cómo en el *Preámbulo de la Ley 16/1985 se hace una simple remisión a la Ley del 13 de mayo de 1933 como antecedente de la protección del Patrimonio Histórico, llegando a calificarse a dicha ley de venerable y a que surgió en el contexto de nuestra mejor tradición intelectual, jurídica y democrática, olvidándose de que realmente dicha ley, no ha sido sino un episodio más en la evolución de la normativa sobre el Patrimonio Histórico Español, y además, quizás no haya sido ni siquiera mejor –técnicamente– que su precedente, el Real Decreto Ley de 9 de agosto de 1926. En la misma línea tendríamos las opiniones de Parada Vázquez al señalar el antidemocrático vicio de defender la democracia con innecesaria mendacidad, pues es indudable que el origen moderno de las técnicas de protección de los tesoros históricos-artísticos deriva del Derecho pontificio que influye en la legislación italiana, y ésta a su vez, en nuestra ley vigente, nada original por cierto, y que se inspira en la ley italiana de 29 de junio de 1939(...)* En cuanto a la Ley republicana de 1933, será todo lo venerable que se quiera, pero es también una evidencia la superioridad técnica del Real-Decreto Ley de 9 de agosto de 1926<sup>2882</sup>. En los prensa aparecería reflejada la noticia como fue el caso del periódico conservador *Epoca*, con el título *El Tesoro Artístico Arqueológico Nacional*<sup>2883</sup>.

El Decreto-Ley de 1926 estaría articulado en 40 artículos, distribuidos en tres bloques:

El Título I que correspondería a la concepción del Tesoro Artístico Nacional, que constaría de un solo artículo.

El Título II, que constaría del artículo 2 al 23, que correspondería a la tutela de los Bienes Inmuebles, con el subtítulo sui generis de *De la protección y conservación de la riqueza arquitectónica, histórico-artística de España y del carácter típico de sus pueblos y ciudades*, donde ya se estaba introduciendo como novedad la distinción entre un bien inmueble independiente y su entorno urbano.

El Título III, entre el artículo 24 al 40, referente a la tutela de los Bienes Muebles, con el subtítulo *la riqueza mueble y exportación de obras de arte*, que constituiría una novedad en cuanto se le estaba haciendo una referencia tutelar específica a los bienes que hasta este momento habían tenido una menor tutela.

No cabe duda que se estaba anticipando a la futura legislación republicana de 1931, con una serie de pilares básicos que intentarían solventar los problemas que hasta este momento habían generado en la tutela del Patrimonio Monumental, especialmente por la limitación que había supuesto el

<sup>2882</sup> PARADA VAZQUEZ, J. R. *Derecho Administrativo. III. Bienes Públicos y Urbanismo*. 2º ed., Madrid, 1989, p.249.

<sup>2883</sup> *Epoca*, Año XXVIII, N.27.023, Madrid, Lunes, 16 de agosto de 1926.

carácter absoluto del derecho de la propiedad privada. Entre las novedades que se pueden contemplar en la nueva regulación estarían:

- El triunfo del principio intervencionista del Estado en la tutela del Patrimonio Monumental.
- La amplitud del concepto jurídico de Patrimonio Monumental, por la que se integraban bienes inmuebles y muebles, pero que al mismo tiempo quedaba indeterminado el fundamento jurídico protector, al unir al valor artístico lo cultural.
- Los intentos de una regulación específica del Patrimonio Monumental Eclesiástico.
- Los límites del derecho de la propiedad privada, especialmente en la regulación del tráfico de bienes muebles de interés histórico y artístico.

### **1. La configuración de una ley tutelar del Patrimonio Monumental.**

La promulgación del Decreto de 6 de agosto de 1926 nacería en virtud de un contexto determinado como fue el incremento de ventas ilegales de los bienes de interés histórico y artístico, especialmente los inmuebles, especialmente por los expolios que se produjeron en la iglesia de San Baudelio de Berlanga, por la supuesta venta fraudulenta que se realizaron de sus pinturas murales, que después de un largo pleito judicial volvería a priorizarse los intereses de los particulares, despertando un verdadero clamor social por el respeto de unos bienes que iban más allá de lo puramente particular. Por ello se intentaría paliar la situación presentando algunos proyectos de Ley como el del Duque de Alba de 1925, a instancia de la Real Academia de San Fernando, que quedaría frustrada, hasta que finalmente se planteó la posibilidad de realizar una nueva regulación normativa que atajara definitivamente los problemas que habían impedido una verdadera regulación normativa del Patrimonio Monumental.

#### **1.1 La venta ilegal de bienes artísticos.**

Durante la etapa del régimen del Directorio Militar se incrementaría las ventas fraudulentas de bienes inmuebles, como aparece reflejado en el texto de Torres Balbas: *Aún a principio de este siglo se conservaban algunas residencias con magníficos restos de su esplendor. En estos últimos veinte años la destrucción ha sido mayor que en los doscientos anteriores, pues al olvido en que estaban ha sucedido la codicia haciendo granjería de sus restos (...) Chamarileros y anticuarios conocen bien el camino de los antiguos palacios de nuestra nobleza, muchos de cuyos despojos están hoy en los museos, colecciones y viviendas del extranjero para mejor provecho, ya que no honra, de la aristocracia española*<sup>2884</sup>. El arquitecto señalaba una serie de inmuebles perteneciente a la arquitectura civil que fueron destruidos o enajenados en

---

<sup>2884</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo “De cómo desaparecen los antiguos palacios de la nobleza castellana”, *Arquitectura*, Año V, N.45, Madrid, enero de 1923, p.105.

los primeros años del siglo XX, como el castillo-palacio de las Navas del Marqués, de Avila, cuyo propietario, la casa de los Medici, lo vendería a la Unión Resinera Española; El Palacio de los Condes de Miranda, en Peñaranda del Duero, propiedad del ducado de Alba, que pasaría a los administradores de éste, y posteriormente quedaría abandonado, el castillo de Calahorra (Granada), que lo describe en total abandono, etc.<sup>2885</sup>. Y es se fue afianzando un mercado de antigüedades fraudulentos, incluso participando de intermediarios eruditos de la época como Antonio Vives, catedrático de Epigrafía y Numismática de la Universidad de Madrid, Jorge Bonsor, figura llena de polémica, e incluso pintores de primera fila como Zuloaga o Aureliano de Beruete que colaboraron en la venta de cuadros de Goya y Velázquez<sup>2886</sup>. Un caso digno de destacar y estudiado recientemente fue el de Arthur Byne, arquitecto norteamericano establecido en Madrid desde 1914, experto en arte español con fama de hispanófilo<sup>2887</sup>, de la Hispanic Society of America desde 1914, que en realidad se convertiría en un verdadero depredador de obras de arte española, cuyo fue primordialmente el millonario americano William Randolp Hearst, para sus mansiones privadas. En 1919 William Randolp Hearst, el magnate de la prensa americana, diseñó en sus posesiones de San Simeón, de California, en la finca que denominaría la Casa Encantada, la construcción de un complejo arquitectónico, adquiriendo para ello un amplio número de inmuebles de interés histórico y artístico de origen español, procediendo a establecer una red de anticuarios y tratantes de arte en Europa, que fueran capaces de suministrarles todo tipo de piezas artísticas, incluso el desmontaje de edificios y su traslado a la mansión. De esta manera entre 1925 y 1931 le proporcionaría las dos piezas más importantes de toda la colección, los monasterios de Santa María de Sacramenia y el de Oliva. El monasterio de Sacramenia no pudo ser salvado, a pesar de la actuación que realizó la Comisión de Monumentos que visitó al Monasterio el 29 de julio, según informe del propio Delgado Regio. No existe constancia de quien autorizaría la exportación a USA, pero la realidad es que ya en 1925 estaba en manos del magnate americano por una suma de medio millón de dólares el claustro pasaría a manos del magnate norteamericano<sup>2888</sup>. Más paradójico fue la venta del monasterio cisterciense de Oliva, siendo vendido al director del

<sup>2885</sup> TORRES BALBAS, L., 1923, pp.108-111.

<sup>2886</sup> TUSELL GOMEZ, J. "El patrimonio artístico español en tiempos de crisis" en ARGERICH, I. y ARA, J. (eds.), *Arte protegido, Memoria de la Junta del Tesoro Artístico español durante la guerra civil. Madrid, Instituto de Patrimonio Español, Museo Nacional de Prado*, pp.17-25.

<sup>2887</sup> Sobre Arthur Byne, MERINO DE CÁCERES, José Miguel, "El cincuentenario de la muerte de Arthur Byne", *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Segundo Semestre de 1985, Núm.61, pp.147-210; Arthur Byne, el saqueador, *Descubrir el arte*, N° 32, 2001, pp.102-104.

<sup>2888</sup> Las vicisitudes que tuvo posteriormente el inmueble en tierras americanas, queda reflejado exhaustivamente en el estudio de MERINO DE CÁCERES, José Miguel, "El Monasterio de San Bernardo de Sacramenia" en *Boletín de la Real Academia de San Fernando*, primer semestre de 1982, Núm.54, p.123. TORRES BALBAS, Leopoldo "El Monasterio Bernardo de Sacramenia (Segovia)", *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 1941, pp.197-225. MERINO DE CÁCERES, José Miguel "La reja de la Catedral de Valladolid en Norteamérica" *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, Tomo 53, 1987, pp.446-453

Banco Español de Crédito en Madrid, Fernando Beloso Ruíz. Tras comprobar que el conjunto monasterial era del Estado, aunque no aparecería así reconocido en el Registro de la propiedad, procediéndose a ello el 3 de diciembre de 1927, y a continuación en febrero de 1928 Beloso habría adquirido por solo 3.130 pesetas el inmueble. Unos meses después sería revendido a un magnate americano, siendo desmontada la Sala Capitular, el Refectorio, el dormitorio de novicios, la galería norte del claustro, la portada y otros elementos de la iglesia, dirigiendo toda la operación de traslado el arquitecto Arthur Byne<sup>2889</sup>. Sería un intelectual, Layna, quien alentó las voces de protesta para evitar el expolio, enviando sendas cartas a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia. En su misiva al Duque de Alba, por entonces Director de la Real Academia de la Historia, Layna reclamaría su intervención para que la falta de patriotismo y asqueroso afán especulativo de las gentes de hoy no sigan mermando nuestro cada vez más mermado patrimonio artístico. Iniciada la II República, sería declarada Monumento Nacional el 3 de junio de 1931, aunque la medida sería tarde, ya que las inquietantes circunstancias sociales y política impidieron paliar el desastre, por lo que entre marzo y junio de 1931, los elementos arquitectónicos que configuraban el inmueble serían trasladados a América. El inmueble quedaría almacenado hasta 1951, poco antes de la muerte de Hearst, regalándolo a la ciudad de San Francisco, para ser instalado en el Golden Gate Park<sup>2890</sup>.

Otra de las compras fraudulentas que realizaría Hearst en España fue la adquisición de la colección del Marqués de las Almenas, (1866-1940), ilustre miembro de la Sociedad de Amigos del Arte. El aristócrata español había construido entre 1920 y 1922 va a construir una especie de mansión en el llamado Canto del Pico, verdadero engendro arquitectónico de carácter historicista, que paradójicamente sería declarado monumento histórico-artístico en 1930, donde incluyó una amplia colección de obras de arte gracias a la inversión de la fortuna de su mujer, Francisca Maroto. Sin embargo, en 1921, Abarzuza pondría en venta su amplia colección, probablemente por las diferentes pérdidas patrimoniales que habían comenzado a tener<sup>2891</sup>. Para ello entraría en contacto con Arthur Byne, para que pudiera ser comprada por algún coleccionista norteamericano, como se puede comprobar en la carta que envía Mildred Stapley, esposa de Byne, a Julia Morgan, la arquitecta de Hearst, insinuándole la oportunidad que tendría en adquirir fácilmente y a buen precio una colección de arte español para ornamentar el complejo de San Simeón, que

---

<sup>2889</sup> LAYNA SERRANO, Francisco, *El Monasterio de Ovila*, Guadalajara, 1998.

<sup>2890</sup> LAYNA SERRANO, El Monasterio de Ovila, en *Norteamérica*, en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 1941, p.484; GAYA NUÑO, 1961, p.169.

<sup>2891</sup> MARTINEZ RUIZ, María José “Luces y sombras del coleccionismo artístico en las primeras décadas del siglo XX: El conde de las Almenas” *Goya*, Núm.307-308, 2005, pp.284-285.



por su matiz ejemplificador lo incluimos: *Si el Sr. Hearst estuviera interesado en adquirir aquí cierta colección privada (recién puesta en nuestras manos para su venta), la casa que están construyendo podrían contener la más fina muestra de arte español en nuestro país (...) A diferencia de la mayor parte del arte español que llega a los Estados Unidos, esta colección no es de los siglos XVII y XVIII, sino principalmente del siglo XV y XVI*<sup>2892</sup>. De esta manera, en 1922, Hearst adquiere el techo llamado Casa de los Judíos, de Teruel, y en 1924, otro ofertado en el conjunto también de Teruel. Cabe anotar como hacia el 14 de marzo de 1925 en que Byne escribe a Julia en la que le apunta no solamente el buen precio en que le va a dejar las piezas del lote completo de 301, de un precio total de 2.059. 450 pesetas (unos 412.000 dólares de la época), sino al mismo tiempo advirtiéndole que se debe apresurar en comprarlas, ya que era posible que en un año la legislación española prohibiera la venta libre de piezas de alta calidad artística. Y como así presagiaba, ocurrió ya que sería promulgado el Real decreto de 9 de agosto de 1926, por la que se prohibía la exportación de las obras de arte. A pesar de ello, la promulgación de la ley no fue un obstáculo para que el marchante pudiera en diciembre de 1926 sacar de España una gran parte de la colección, con el pretexto de que iban a ser expuestas en un certamen artístico dedicado al arte español que iba a celebrarse en Nueva York. La realidad fue otra ya que los objetos que quedaban de la colección española serían ofrecidos a O. Bernet y H. Parke, directivos de la American Art Assotiation de Nueva York, mediante la venta por subasta. De esta manera, en enero de 1927 se efectuaría la venta de 447 piezas, entre las que se encontraban, como así consta en el catálogo que efectuaron para la ocasión, que realizarían el propio Byne, Staplley y Canessa, pinturas del siglo XV al XVII, un gran número de esculturas medievales, ricas vidrieras, tapices, etc.<sup>2893</sup>. La venta no cabe duda que había sido efectuada de manera fraudulenta ya que las piezas habían salido del país con el objetivo de participar en una exposición y no en una subasta, por lo que la operación era un verdadero fraude. Sin embargo, la respuesta administrativa fue irrelevante, a pesar de que un vocal de la Comisión de Valoración de objetos propuestos para la exportación, denunció la operación fraudulenta ejercitada por el conde y el marchante, ante el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que por causas desconocidas no ejecutó las medidas que la propia legislación les atribuía para poder intervenir en el caso. Una vez más la negligencia o las limitaciones administrativas en personas de relevancia en la vida social impediría la aplicación de una ley que había abierto la esperanza en poner límite a los frecuentes expolios que había padecido el patrimonio monumental español en este momento. El propietario del inmueble era el representante de una firma norteamericana interesada en el despiece y traslado del monumento, probablemente el propio Arthur Byrne. Cuando las autoridades de Calera de

<sup>2892</sup> MERINO DE CACERES, J.Miguel, “La colección de arte del Conde de las Almenas”, en *Descubrir el arte*, 44, octubre de 2002, p.98.

<sup>2893</sup> MARTINEZ RUIZ, María José, 2002, p.100.

León vieron las intenciones del nuevo propietario sería comunicado a la Comisión de Monumentos, y éste lo trasladó al Gobernador Civil de Badajoz, quien intervino con rapidez poniendo freno al desmantelamiento del convento santiaguista e informando de los hechos al Ministerio de Instrucción Pública. Días más tarde, la Dirección General de Bellas Artes solicitaría a la Comisión de Monumentos de Badajoz que le informara si el convento era digno de conservación. Con fecha del 26 de julio de 1930 se le encargaría al arquitecto diocesano un Informe del bien inmueble, que sería presentado el día 30 del mismo mes, en la que se subrayaba su valor artístico por lo que no se debía pensar en su derribo, en su enajenación, en el despojo que le amenazaba. Dicho informe sería remitido a la Dirección General de Bellas Artes por Comisión de Monumentos de Badajoz que solicitaría que fuese declarado Monumento Nacional, para lo que debía de contar con los informes favorables de las Reales Academias.

### **1.2. El proyecto de Real decreto del Duque de Alba de 1925 sobre la exportación de obras de interés histórico y artístico.**

En 1925 se presentaría un proyecto de Real Decreto sobre exportación de obras de interés histórico y artístico, escrito por el Duque de Alba a instancia de la Real Academia de Bellas Artes. Con ello se intentaba paliar las amplias pérdidas del Patrimonio Monumental que se estaban dando en este momento. Se insertaba el concepto Tesoro Artístico Nacional, que estaría formado por los bienes muebles y los inmuebles, tanto de propiedad de la Nación, como de Corporaciones y particulares, con antigüedad anterior a la segunda mitad del siglo XIX, que por su valor o interés histórico, arqueológico o artístico, o por sus especiales condiciones, deben ser por las leyes amparadas (art.1), definición que en cierta forma recogía algunos aspectos de la tradición normativa, aunque insertaba ya la superación de la dualidad privado y público en cuanto a su régimen tutelar. Se incluían también entre los bienes a tutelar *todas las producciones de las Artes e industrias o documentales, de igual valor e importancia* (art.2). Se incluía como obligación perentoria que los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, y, en general, todo representante legal de entidad reconocida, formarían y presentarían al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, un catálogo o relación detallada de las obras, expresando si son de su propiedad o si las tienen en depósito (art.3), por lo que se prohibía la exportación de las obras que, por su interés y valor histórico, arqueológico o artístico, supusiera *un grave daño y notorio perjuicio para la historia, la arqueología y el arte*, por lo que solamente podría autorizarse únicamente *las réplicas o imitaciones y la de aquellos otros objetos cuya exportación no pueda mermar realmente la riqueza artística española* (art.4). Sin embargo, nuevamente se incorpora un doble tratamiento a la hora de regular la tutela del Patrimonio, ya que distinguía entre las Corporaciones que fueran entidad propietaria, que tuvieran los bienes en propiedad o en posesión, que debían de dar *conocimiento de su propósito al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes*,

o al de Gracia y Justicia, si el bien fuera propiedad de Corporaciones de entidad eclesiástica, para lo que necesitaba la promulgación de un Real decreto, de aquellas transacciones que se hiciesen entre particulares (art.5). El propietario que quisiese exportar cualquier obra de arte que estuviese en su poder debería de informar al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.6.1), para lo que se debía calificar dichos bienes por la Comisión de Valoraciones de Objetos Artísticos, creada por Real decreto de 16 de febrero de 1922, a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 29 de agosto del mismo año, expedida por el Ministerio de Hacienda y ajustándose, en cuanto al procedimiento, requisitos y formalidades que se han de observar, tanto por la expresada Comisión, como por las Aduanas, a lo prevenido en dicha Real orden y en el sancionado Real decreto (art.6.2). El Estado, podría usar el derecho de tanteo, por el precio establecido para su venta, *supuesta buena fe en el vendedor o comprador, o por la avenencia del vendedor a la oferta del Estado* (art.7), potestad que podría efectuar durante un periodo de los tres meses siguientes de tenerse conocimiento de la venta, pudiendo prorrogarse este plazo hasta seis, cuando el Estado no dispusiera por el momento de los fondos necesarios para adquirir el objeto u obra motivo de la enajenación, quedando en suspenso cualquier operación mercantil (art.8), por lo que pasado este periodo, la Corporación o entidad propietaria o poseedora del objeto podrá entregarla al propietario (art.8). Sería el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, concedería la autorización para exportar, con vista de la declaración de la Comisión de Valoraciones de objetos artísticos, *que juzgue que la obra no es de aquellas cuya exportación debe ser prohibida* (art.9). Si el propietario no aceptase el precio que ofrece el Gobierno sobre algunas obras de alto e insustituible valor artístico, arqueológico o histórico, sería sometido al juicio de dos peritos, designados uno por el Gobierno y otro por el poseedor del objeto, los cuales fijarán el precio, teniendo en cuenta su valor dentro del Reino (art.11), que caso de que los peritos no estuvieran conformes en la valoración, se decidiría un tercero, nombrado de común acuerdo (art.11). Serían declaradas nulas las ventas de los Monumentos de antigüedad y de arte realizadas contra las disposiciones del presente decreto, por lo que el Estado se incautaría de los objetos mal vendidos y del precio de la venta, y el vendedor, cuya insolvencia sería considerada siempre como fraudulenta, incurrirá en la penalidad de defraudación a la Hacienda (art.13), pudiéndose incluir en el delito de contrabando, cuando el bien no hubiera sido presentado en la Aduana respectiva o cuando se presentase con declaración falsa o alterada (art.14). Incluso en los casos que el Gobierno de bienes sin autorizar su exportación, estén o no declaradas o catalogadas entre el Tesoro Nacional, el Estado procedería contra el poseedor o vendedor, convirtiéndose éstos en responsables con todos sus bienes del daño causado por contrabando y defraudación, debiendo entregar el valor del objeto exportado o el precio que hayan recibido (art.15).

### **1.3. El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga: un anticipo de la Ley de 1926. La sentencia del Tribunal Supremo del 24 de abril de 1925.**

Desde que en 1884 se publicara la primera mención sobre la ermita de San Baudelio, por Emilio Romera, el interés por el antiguo monasterio del siglo X no dejó de crecer en torno a la investigación científica, especialmente por las pinturas murales, fechables hacia la segunda mitad del siglo XII, verdadera joya del románico español, al mostrar un rico repertorio iconográfico del bestiario medieval<sup>2894</sup>. Este hecho no pasaría inadvertido por un gran número de comerciantes de arte, entre el que se encontraba un anticuario establecido en Barcelona llamado Leone Leví, quien en 1922, inició las gestiones para su adquisición. Las primeras gestiones las realizaría con las autoridades eclesiásticas, primero con el abad de la Concatedral, Santiago Gómez Santacruz, que ya le advirtió que la ermita era Monumento Nacional, y posteriormente con el Obispo de Osma, con el arcipreste de Berlanga y finalmente con el Obispo de Sigüenza, monseñor Eustaquio Nieto, a quien se refirió el interés que tenía por comprar dichas pinturas. Al parecer no hubo un primer acuerdo para ello, pero curiosamente Levi de que la ermita era propiedad particular, de unos vecinos de Casillas, que la tenían inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad de Almazán, por lo que se reunió con ellos, acordando la operación de compra. Dos de sus propietarios, Carlos Yubero y Victor Antón, al concebir que la ermita era Monumento Nacional, concibieron que la venta precisaba de la autorización de las instituciones pública, tal como establecía la legislación pertinente, más aún al ser confirmadas por el propio director del Museo Numantino, Blas Taracena, y el propio civil de Soria, Luis Posada, que les indicaron que no podían ser vendidas. Al parece el registrador de la Propiedad de Almazán, Juan Francisco Marina Encabo, le sugirió lo contrario, por lo que decidieron que podían vender las pinturas murales, por lo que se vendieron por la cantidad de 29.000 pesetas<sup>2895</sup>.

No obstante, comenzaron a surgir una serie de obstáculos en la libre disposición del bien de interés histórico-artístico, al producirse un amplio número de reacciones en cadena por parte de las instituciones públicas, tanto locales como provinciales, en la que habría intervenido la Comisión Provincial de Monumentos de Soria, el capitán de la Guardia Civil de El Burgo de Osma, Felipe Pascual Palomo, que amedrentó al propio Leví para que no fuera despojada la ermita de las pinturas murales e incluso el propio Gobernador

---

<sup>2894</sup> ALVAREZ, M.A. y MÉLIDA, J.R. “Un monumento desconocido. La ermita de San Baudelio en el término de Casillas de Berlanga (Soria)”, *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, XV, Madrid, 1907, pp.144-155; GARNELO, Milagros, “Descripción de las pinturas murales que decoran la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria)”, *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, Núm.32, Madrid, 1924, pp.96-109.

<sup>2895</sup> TERÉS NAVARRO, Elías “El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga”, *Goya*, Número 319-320, Julio-Octubre, 2007, p.199.

Civil, que al ser informado por aquél se dirigiría al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En el Oficio del 1 de julio de 1922 de la Comisión de Monumentos de Soria se notificaba la presencia de un comerciante de antigüedades dispuesto a adquirir las pinturas murales de la ermita de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, a los que se unía unos días más tarde, el 3 de julio, que León Leví había arrancado parte de las pinturas murales de la ermita de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, personándose el Gobernador Civil de la Provincia y suspendiendo. En el Oficio del 6 de julio de 1922, la Comisión de Monumentos de Soria manifestaba la indignación pública existente en la provincia por el atentando que han sido objeto las pinturas murales así como solicitando que se adoptasen las medidas urgentes. Un encuentro entre Levi y el propio Gobernador nos muestra la tónica dominante en la conciencia patrimonial del momento, ya que el propio registrador defendería los derechos del nuevo propietario, frente a las alegaciones del propio abad quien postulaba la Ermita era Monumento Nacional y pertenecía a España, a lo que se unía el hecho de que las pinturas se habían conservado gracias a los gastos del Estado, por lo que se anulaba la propiedad privada, tesis que se estaba defendiendo en muchos casos similares en el ámbito doctrinal jurídico del momento. Finalmente, el gobernador ordenó instruir atestado, por lo que se tendría que custodiar la ermita constantemente, cerrándose el inmueble dejando las llaves en poder del capitán de la Guardia Civil. Por fin sería nombrado un juez especial para el caso, Cayetano Rodríguez de los Ríos, juez de El Burgos de Osma, cuya primera actuación sería el procesamiento de Levi, Marina, y 15 vecinos de Casillas exigiéndoles respectivamente, 5.000, 6.000 y 1.250 pesetas a cada uno de los vecinos procesados. Por su parte, Levi nombraría como abogado defensor a Gascón y Marín, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Central. El 21 de julio, Elías Tormo presentaría en el Senado una interpelación parlamentaria, elogiando a la Administración de Bellas Artes por las actuaciones que hasta este momento se habían realizado. El Juez especial, por su parte, pondría en principio bajo la disposición de la Comisión de Monumentos, la custodia de la ermita, así como los lienzos de las pinturas ya arrancadas y parte de un retablo. Las gestiones continuarían a favor de la conservación de las pinturas para lo que se encargaría un informe sobre la recolocación de las pinturas a la Real Academia de Bellas Artes, informe que sería redactado por Manuel Aníbal Alvarez.

A raíz de los deterioros que se habían causados a las pinturas murales, se dictaría la **Real Orden de 31 de enero de 1923**, en la que se establecía que la Administración Pública mantenía el carácter de propiedad de Derecho Civil y Eclesiástico y la posesión en que estaba de acuerdo con la autoridad eclesiástica; se suspendían las obras que habían realizado Levi, por lo que se restablecería en lo posible a su estado primitivo y al mismo tiempo se declaraba responsable al anticuario de los deterioros y las destrucciones producidas sobre la obra, por lo que se harían a su costa todos los trabajos de



reintegración, designándose al abogado que habría de intervenir en los tribunales civiles o criminales, para el restablecimiento del derecho de retracto. Sin embargo, el 23 de febrero antes las pretensiones de Levi, se promulgaría una nueva Real Orden, *por no haber sido notificada la primera, con arreglo a la Ley del procedimiento Administrativo de 1889, retrotrayendo el expediente para que en él pudiera ser oído el Sr. Leví y los demás interesados.*

En los Informes del Negociado y de la Sección se insiste en la falta de una legislación concreta relativa al concepto de monumento nacional, y que ello había dado origen a los hechos ocurridos, que la propiedad de la ermita aparecía comprobada por parte de los vecinos; que la Ley de 1911 reconocía a los propietarios el derecho, sin otras limitaciones que las de inventariarlas y satisfacer un impuesto en caso de exportación; que no había habido intención deliberada de estropear las pinturas, y que podía considerarse lícita la venta de las mismas y que debían subsanarse en lo sucesivo las deficiencias de procedimiento en lo relativo a las declaraciones de monumentos nacionales. Por su parte la Asesoría Jurídica del Ministerio en su informe estimó que con la certificación del Registro de Propiedad presentada había quedado determinada la propiedad de la ermita de San Baudelio; que la Administración estaba en el caso de reconocer el dominio de los vecinos a cuyo favor estaba inscrita, debiendo apreciarse la licitud de la venta realizada por los que aparecían como dueños, sin que pareciera existieran motivos para exigir responsabilidades por los daños ocasionados en el arranque de las pinturas; que la Ley de 14 de marzo de 1915 se refería exclusivamente a los monumentos arquitectónicos y artísticos, pero no a monumentos nacionales, como lo era la citada ermita, discrepando de la Sección en cuanto a que fuera preciso ejercitar la acción de retracto. Como dato anexo podemos apuntar como la propia Comisión de Monumentos no llegó a tener noticias de la Real orden del 23 de febrero. La situación se complicaría aun mas cuando la Audiencia de Soria dictó el 14 de marzo de 1923 un acto de sobreseimiento provisional, al no hallarse debidamente justificada la penetración del delito que había dado la causa, por lo que suponía la conclusión del sumario instruido por el juez especial, que había iniciado el 20 de julio de 1922.

El 6 de abril los propietarios de la ermita hicieron entrada en el Ministerio de Instrucción Pública una instancia para que fuera reconocido su derecho de propiedad, por lo que se considerase lícito la venta de las pinturas murales a Levi. Por su parte, Leví, el 5 de mayo comparecería alegando ser dueño de las pinturas murales, *por haberlas adquiridos de quienes, según el Registro, eran sus propietarios, pues la declaración de Monumento Nacional ni se había notificado a los vendedores ni hecho constar en el registro, no teniendo el Estado, en consecuencia, más derecho que el de tanteo o retracto y que marcado por la ley para el ejercicio de este último el plazo de veinte días, contando desde aquél en el Estado tuviera conocimiento de la venta, y habiendo ocurrido ésta en junio de 1922*

*se había perfeccionado aquella a su favor por el transcurso del plazo para retraer, y alegando, por último, lo mismo que los vendedores, que no hubo en la venta intención determinada de deterioro, sino por el contrario, propósito de conservación, puesto que de una enajenación se trataba. Las alegaciones de Levi eran muy precisas: que no había traslado ni declaración alguna en el Registro de la Propiedad ni en ninguna parte en que se hiciese constar que tal ermita había sido declarada monumento nacional, disposición que no limita tampoco los derechos de libre disposición de los propietarios, ya que nadie puede ser privado de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública; que la ermita de San Baudelio no estaba incluida en forma reglamentaria en el catálogo de monumentos artísticos que las leyes ordenan formar a la Administración; citaba las disposiciones del Código Civil pertinentes, sosteniendo que, separadas las pinturas, sin detrimento alguno, del muro en que estaban adosadas, cambia su naturaleza jurídica y se convierten en cosas muebles; que no había para qué hablar de exportaciones, puestos que las mismas se encontraban en Casillas; que no había responsabilidad alguna por deterioro, puesto que se trataba de actos de conservación precisamente. Asimismo, el 6 de junio el Negociado de Bellas Artes informó que la ermita de San Baudelio aparecía ser propiedad particular y podía considerarse lícita la venta de Pinturas, procediendo que el Estado ejercite el retracto, con lo que estuvo de acuerdo la Sección, pero entendiendo debía oírse previamente a la Asesoría Jurídica, lo cual acordó la Dirección, procediendo a reconocer la propia Asesoría Jurídica la propiedad privada de las pinturas, pero puntualizando que estando reintegradas las pinturas y tratándose de un Monumento Nacional, el Estado tiene facultades para impedir que las mismas sean llevada de allí, pudiendo obligar a los particulares a que no realicen acto alguno de alteración en el edificio, conservándolo íntegramente en el estado que tenga, por lo que estima intención deliberada de estropearlas, y si hubo algún deterioro por la manipulación, una vez restauradas no debe apreciarse como tal.*

El 12 de septiembre de 1923 sería promulgada una nueva Real Orden, refundiendo las anteriores de 31 de enero y 23 de febrero. En la misma se establecían unas importantes medidas que constituían sin duda alguna una verdadera novedad en el panorama legislativo español, ya que despojaba en cierta forma de un bien de interés histórico y artístico adquirido por un particular, al mismo tiempo que el derecho del retracto por parte del Estado. Por su importancia he incluido literalmente los siete artículos de la disposición del Director General de Bellas Artes:

1º. Se declara no haber habido intención de deterioro de las pinturas de que se trata, por parte del comprador y vendedores, estando por tanto, exentos de responsabilidades estatuidas por el artículo 10 de la ley de 1911 y 22 del Reglamento de 1º de marzo de 1912, en atención a la sentencia dictada por la Audiencia de Soria.

2°. Se considera comprendida la ermita de San Baudelio, en su concepto de Monumento Nacional, en la ley de 4 de marzo de 1915 relativa a los Monumentos arquitectónicos-artísticos, no pudiendo por lo tanto hacer modificación alguna en él o sin el consentimiento de este Ministerio, incurriendo en las responsabilidades penales consignadas en las leyes en caso de contravención de este precepto.

3°. Dispuesto por Real Orden de 23 de noviembre de 1922, por tratarse de un Monumento Nacional, la reposición de las pinturas de la ermita, se repondrán también las que el Juzgado de Almasán retiene en su poder como prueba de convicción, en los muros de que fueron arrancadas.

4°. Para asegurar más cumplidamente la integridad y conservación de la ermita, se ejercerá por la Administración el retracto, si la venta tuvo lugar, en la forma procedente, entendiéndose que el plazo para interponerlo no comienza hasta la fecha de esta Real orden, incoándose a la vez el oportuno expediente de petición de crédito extraordinario por la Sección de Contabilidad.

5°. Se exige al Sr. Leví el reembolso al Estado de las 24.750 pesetas importe de los gastos estrictos de la reposición de las pinturas, las cuales podrán descontarse, en su caso, del precio del retracto.

6°. Siendo urgente esta resolución y hallándose en vacaciones la Junta Superior de Excavaciones, no ha lugar a consulta, circunstancia prevista en el artículo 31 del Reglamento de 1º de marzo de 1912.

7°. El recurso legal que los interesados pueden ejercer será el interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en vía contenciosa, con arreglo al artículo 87 del Reglamento Interior de este Ministerio de 30 de diciembre de 1918 y en el plazo de quince días, a partir de la notificación, con arreglo al artículo 88 del mismo Reglamento.

A raíz de la publicación de la Real Orden, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la Historia y la Comisión de Monumentos de Soria, elevaron una instancia a la Presidencia del Directorio Militar, llamando la atención sobre la intentada venta de las pinturas murales y pidiendo la tercera de las expresadas entidades, si se estima pertinente, que se obtenga de la Audiencia de Soria relación detallada de los extremos del sumario por lo que respecta al conocimiento que el Sr. Levy tenía del carácter de las pinturas que intentaba comprar, impugnando dicha entidad la Real orden de 12 de septiembre, entre otros extremos, por los perjuicios que se ocasionarán al Estado con el ejercicio de la acción de retracto. De otra parte, la Asesoría Jurídica informó en dicho expediente el criterio de que tratándose de un Monumento Nacional como era la ermita de San Baudelio, no se precisaba el ejercicio de la acción de retracto para asegurar la conservación y sostenimiento de las pinturas murales, por lo que *la Administración podía imponer, con independencia del derecho de la propiedad, impidiendo cualquier acto de deterioro o destrucción sin conocimiento del Ministerio*. De esta manera la Dirección general de Bellas Artes propuso suspender la

tramitación del expediente hasta *que por el juzgado de Almazán se resuelva sobre la propiedad de la ermita, siendo entonces únicamente cuando el Ministerio podrá exigir las responsabilidades procedentes y ejercitar los derechos que estime oportunos*, ordenando a la Dirección de lo Contencioso que un Abogado de Estado se muestre parte en el juicio de propiedad a favor del mismo, con arreglo a las instrucciones que la Dirección de Bellas Artes le remita. Se mostraban contraria al derecho del retracto al considerarse *la lesión que a los intereses del Estado habrá de ocasionar el ejercicio de la acción de retracto mandado incoar por la Real orden de 12 de septiembre, toda vez que resuelto por la misma que la ermita de San Baudelio como Monumento Nacional, debe considerarse comprendida en la Ley de 14 de marzo de 1915 y como tal asegurada la integridad y permanencia de las pinturas con independencia de la cuestión de propiedad, es inútil la adquisición de ellas como sostuvo la Dirección de lo Contencioso ratificando el dictamen de la Asesoría, y ya que el retracto habría de llevarse a cabo pagando la suma contenida o que se conveniese, previa la correspondiente tasación*. Por otra parte, se incluía el problema del derecho de dominio en que aparecía inmerso el destino del inmueble, con la controversia entre el Obispo de Sigüenza y los vecinos de Casillas de Berlanga, en la que el Estado *no podría mostrarse parte en el mismo para sostener un dominio del que indudablemente carece y para alcanzar el cual se ejercitaba precisamente la acción de retracto, pues ello supone confundir los dos términos que en la cuestión se ventilan, uno la propiedad de la ermita de la competencia exclusiva de los Tribunales cuando por alguien es discutida, y otra la defensa de los intereses artísticos y culturales debidamente asegurados por la Ley de 4 de marzo de 1915 en independencia del dominio del inmueble declarado Monumento Nacional, aunque se precisaba que era indiscutible el derecho que al Estado corresponde para defender la especial situación que supone el que un inmueble determinado sea declarado Monumento Nacional, para lo cual tendrá que personarse en el juicio de dominio, si este existe en el Juzgado de Almazán, por medio del Abogado del Estado a quien la Dirección de lo Contencioso habrá de comunicar en su día las instrucciones que fueran precisas, por corresponder precisamente a dicho Centro la indicada función*;

Al mismo tiempo contra lo dispuesto en la Real Orden de 21 de septiembre de 1923, en sus apartados segundo al quinto, se inició ante la Sala recurso contencioso-administrativo por la legal representación de D. León Leví; D. Carlos Yubero y demás demandantes, formalizaron su demanda con la súplica de que se revoquen los indicados apartados de la Real Orden recurrida, declarando en su lugar no ser aplicables al caso debatido de los preceptos de la Ley de 4 de marzo de 1915; no proceder al reembolso de las cantidades a que se refiere el número quinto y haber transcurrido el plazo para ejercitar la Administración el retracto, en el supuesto de que se estimare que a ello tenía derecho. Por su parte, el fiscal del Tribunal, en cumplimiento de la Real Orden de 15 de noviembre de 1923, presentó demanda contencioso-administrativa, contra el extremo de la Real Orden de 12 de septiembre de 1923, en la parte que la misma dispuso que se ejercitara por el Estado el derecho de retracto, si la venta de las pinturas murales de la ermita de San Baudelio de Casillas de

Berlanga, provincia de Soria, había tenido lugar, suplicando en su escrito que previo el emplazamiento de los demandados y la correspondiente tramitación, se dictará sentencia revocando o anulando la parte de la mencionada Real Orden que recurría en cuanto ordeno el ejercicio de la acción de retracto.

El 14 de enero de 1924 los propietarios enviaron un escrito de protesta a la Comisión de Monumentos de Soria defendiendo sus intereses particulares sobre el edificio que consideraban de legítima propiedad. Posteriormente, el 8 de marzo se remitió un nuevo oficio, donde se muestra significativamente la defensa a ultranza del derecho de la propiedad privada reconocida en este momento por la legislación vigente, como así aparece en el encabezado del texto: *En primer término, hemos de protestar respetuosamente del particular de su oficio en que se dice “en el asunto del atentado cometido con las pinturas murales del Monumento Nacional Ermita de San Baudelio” pues a lo que a nosotros se refiere, no hemos consentido jamás atentado alguno con las pinturas de la ermita de que somos propietarios, y así ejercitamos un legítimo derecho de propiedad amparados en el Código Civil, ley hipotecaria, y en las leyes 7 de julio de 1911 y 4 de marzo de 1915, dejando siempre a salvo los derechos que el Estado reconocen esas dos citadas leyes, que nunca le hemos disentido, ni mucho menos negado pero que ello no supone jamás lo de dueño, los cuales quedan siempre a salvo en quien radiquen como están ahora en nosotros los dominicales que ostentamos sobre la ermita de referencia y todo lo a ella anexo.* A continuación se intentaba aclarar la significación jurídica en que aparecía insertada la definición de Monumento Nacional: *que la declaración de Monumento Nacional, como decíamos en nuestro anterior escrito, en nada contraría la propiedad ni es limitación de los derechos de tal ni de la posesión y sin que la mera tolerancia nuestra haya podido determinar nunca posesión jurídica que pueda aprovechar a nadie.* Consideraban que había sido perturbado el estado dominal del bien por parte de la propia Comisión de Monumentos de Soria: (...) *Como todos los actos de dominio ejecutados en nuestra ermita lo han sido y son por los miembros de la Comisión de Monumentos de su digna Presidencia, a esta entidad es a quien realmente nosotros habremos de dirigirnos (...) agregando que como quiera que en esos actos dominicales y de perturbación en la posesión (puestos que como propietarios inscritos se nos presume poseedores), de que estamos siendo objeto, no lo son en virtud de ninguna sentencia, ni mandato judicial que es lo que únicamente permite el art.228 del Código Penal para que la posesión sea perturbada, y a nosotros no se nos ha notificado providencia alguna de esa clase en tal sentido, es evidente que no ha recaído, y por consiguiente es también indiscutible a juicio nuestro, que debe cesar esa perturbación de que estamos siendo objeto, ese estado de desposesión en que se nos tiene, comenzando por hacernos entrega de las llaves de ese edificio-ermita, que debe obrar en poder nuestro como propietario de la misma, la que como toda cosa clama siempre por el dueño donde quiera que se halle, teniendo nosotros acción para vindicarlas de cualquier poseedor, y verificando esto, remover el guarda que hay puesto en dicha ermita, toda vez que nosotros somos muy bastantes para la custodia de ese inmueble, así como velar por todo derecho que pueda corresponder al Estado, compatibles con los dominicales que como antes hemos dicho, nosotros tenemos y así nos han sido reconocido judicial y administrativamente.* Ante las



peticiones de los propietarios, la Comisión de Monumentos de Soria en un oficio fechado el 4 de abril de 1924 instaba a los poderes públicos que fuera resuelto prontamente el litigio ante la presión que estaban teniendo en torno a la cuestión de dominio que había surgido en torno al bien.

La cuestión quedaría zanjada con la publicación de la famosa **sentencia del Tribunal Supremo del 24 de abril de 1925**, por la cual se reconocía la validez de la venta de las pinturas murales de la ermita de San Baudelio y la adquisición consiguiente por León Leví, quien libremente podría disponer de ellas. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando lamentaría en una instancia dirigida a la Dirección General de Bellas Artes fechada el día 9 de mayo de 1925, los términos de la sentencia, deteniéndose especialmente en la defensa integra del conjunto artístico, considerando que las pinturas murales constituían un bien mueble adherente al inmueble histórico en que estaban ubicados, apelando que no podían ser desligadas al considerarse una unidad indisoluble, *puestos que las pinturas que se quieren considerar independientes del resto del templo, son parte muy principal del mismo y forman por su unión esencial con las fábricas que decoran un conjunto arquitectónico del cual son artísticamente inseparables*, un verdadero anticipo de la legislación contemporánea.

Con la promulgación de la **Real Orden de 27 de agosto de 1925** se confirmaría el derecho de la propiedad privada de los propietarios del inmueble, al disponerse que fuese devuelto las llaves del mismo, al mismo tiempo que se prevenía que el edificio seguiría tutelado públicamente en virtud de la ley de 4 de marzo de 1915, al mismo tiempo que quedaba subsistiendo el Guarda, por el carácter de Monumento de la Ermita, estableciéndose los términos en que debía de cumplir su misión de vigilancia. De esta manera se subrayaba el verdadero significado jurídico de la tutela pública de Monumento Nacional, al precisarse que *la declaración de Monumento Nacional de la Capilla, no obstante la alteza de su finalidad, efectuada sin sujeción a ley alguna determinada, tiene que armonizarse con el respeto debido a los derechos dominicales consignados en la Constitución y reguladas por otras leyes generales, máxime cuando los monumentos han sido y continúan siendo de propiedad particular, sin ser incorporado al patrimonio del Estado, por lo que toda limitación de esos derechos de propiedad que no se halle puntualizado en leyes especiales, carecerá de virtualidad para invalidarlos o encerrarlos*. Al mismo tiempo se precisaba que el hecho de entregar simbólicamente la Comisión de Monumentos de Soria las llaves del inmueble, no era *más que el ejercicio de su dominio*. Por su parte se dejaba claro cuál era el límite del dominio de los dueños del inmueble, *previniendo a los interesados que la ermita sigue sometida a las disposiciones de la ley de 4 de marzo de 1915, a virtud de haber sido registrada como tal monumento en el Catálogo y Registro Censual de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y al mismo tiempo acordando que el Guarda que normalmente custodia la ermita de Casillas de Berlanga, por su carácter de monumento, que no se ha alterado, sino que, por el contrario, se ha confirmado en el fallo del Tribunal Supremo, continúe*

*subsistiendo, debiendo la Comisión de Monumentos de Soria determinar la forma en que ha de llevar a cabo su misión, coordinando los derechos de los propietarios con el cumplimiento de la obligación al Guarda encomendada.* De esta manera el 22 de febrero de 1926 se haría entrega de la ermita por parte de la Comisión a sus dueños<sup>2896</sup>.

A mediados de 1926, sin que las instituciones oficiales pudieran hacer nada para impedirlos, comenzaron los trabajos de arranque de las pinturas. Así lo confirmaría el día 22 de julio, el propio Guarda, notificado por la propia Comisión de Monumentos de Soria, en los siguientes términos: *se están verificando obras encaminadas al arranque de sus pinturas murales, y no constatando a esta Comisión que se hallen provistas de la competente autorización ministerial, por cuya causa quizá se hallen estos actos en contraposición con lo dispuesto en el apartado 2º de la Sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de fecha de 12 de febrero de 1925; esta Comisión en cumplimiento de lo que se preceptúa el artículo 13 del Reglamento de las Comisiones de Monumentos, de puesto los hechos en conocimiento del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia*<sup>2897</sup>. Sin embargo, a pesar de las gestiones de la Comisión de Monumentos, las autoridades ministeriales no respondieron, por lo que en solamente dos días se pudo trasladar las pinturas murales fuera de la propia ermita. A partir de este momento, las pinturas serían exportadas instalándose en varios museos de Estados Unidos de América (Museo de Arte de Cinninati, Museo de los Claustros de Nueva York, Museo de Bellas Artes de Boston y Museo de Arte de Indianápolis). Posteriormente, en 1957, el Gobierno español conseguiría recuperar seis escenas, hoy en el Museo del Prado (Madrid), al ser canjeadas por las pinturas del ábside de la iglesia románica de San Martín (Fuentidueña, Segovia).

#### **1.4. Los trabajos de la Comisión encargada de realizar el nuevo proyecto de ley de 1925.**

Sería denominado coloquialmente como Decreto Castillejo, al ser éste el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Castillejo de la Cuesta (1875-1950), uno de los personajes más influyentes del régimen militar, que habiendo obtenido la Cátedra de Derecho Natural en 1912, accedió al cargo de Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes entre el 3 de diciembre de 1925 y el 31 de diciembre de 1930, reformando las enseñanzas universitaria y secundaria<sup>2898</sup>. A raíz del **Real decreto de 3 de noviembre de 1925** se creó

---

<sup>2896</sup> En el acta de la Comisión de Monumentos de Soria de 25 de febrero de 1926 se detalla la entrega de la ermita a sus propietarios. Archivo de la Real Academia de la Historia, CASO/9/7973/79(35).

<sup>2897</sup> Oficio de la Comisión de Monumentos de Soria notificando que se están llevado a cabo el arranque de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga, Archivo de la Real Academia de la Historia, CASO/9/7973/79(31).

<sup>2898</sup> En opinión de José Luis Gómez Navarro, que lo define con un perfil mediocre, ocuparía el Ministerio de Instrucción Pública por ser una persona próxima a los sectores católicos, GOMEZ NAVARRO, José Luis, 1991, p.169.

una Comisión encargada de redactar un proyecto de ley relativo a la conservación de la riqueza histórica y artística nacional. En la Exposición de Motivos ya se plasmaría las intenciones claramente intervencionista del Estado en torno a la tutela del Patrimonio Monumental, que aunque en cierta manera sería considerado como de interés general, todavía subyace la identidad nacional que eran identificados los bienes que se querían proteger, pero dejando abierta una conciencia tutelar del propio Estado que iría asumiendo la obligación de conservación, ya que como así quedaba subrayado *las naciones que conservan en su solar reliquias veneradas de los tiempos que fueron tienen, no sólo con su propia historia, sino con la de la Humanidad, obligaciones que cumplir que le son impuestas por el imperativo de su cultura: la de conservar sus monumentos y sus joyas de arte*, al mismo tiempo que ponerlas *al alcance de aquellos que desean estudiar en ellas la epopeya de sus grandezas pretéritas y de los que, llevados por los puros ideales de la belleza inmortal, que es de todos los tiempos, quieran llenar su espíritu con su contemplación*. Quedaba identificado la modernidad de un país con la conservación de sus monumentos por lo que se afirma tajantemente que *España tiene la suerte de que su anhelo de progreso, sus realidades de nación moderna, tengan un marco grandioso acreditador de lo que fue en otras edades, monumentos testigos de hechos memorables, maravillas que dejó el arte de varias civilizaciones, muestras del esfuerzo de su hijos en todas las épocas de su historia*. De ahí la obligación que debían tener los Gobiernos, no sólo de *evitar la pérdida de cuanto encierra el territorio nacional de interesante y bello, sino procurar que sea admirado por propios y extraños, contribuyendo a conseguir que se conozca a España en estas manifestaciones artísticas que deben ser muestra de su cultura*. Por ello se resaltaba la labor que intentaba realizar el Directorio Militar con el objeto de *conseguir el perfeccionamiento de cuanto se relacione con la educación nacional y con el arte hispano*, por lo que no podía menos dedicar a semejante obra un empeño máximo, *poniéndose primero en condiciones de conocer el problema en todos sus aspectos y las soluciones prácticas que tienen en la hora presente, para que, obtenido tal conocimiento, pueda, en momento oportuno y separándose del camino seguido hasta hoy de dedicar dotaciones misérrimas a los que tiene capital importancia para que sea reconocida su conciencia de país culto, incluir en el Presupuesto del Estado los medios económicos que permitan acometer el magno problema de la conservación de la riqueza artística e histórica nacional*. Con este fin se estimaba *que sólo podrá llegarse a ello mediante el asesoramiento de aquellas capacidades reconocidas en los distintos aspectos del problema*, por lo que sería nombrado en Madrid una Comisión especial encargada de redactar un proyecto de ley relativo a la conservación de la riqueza histórica y artística nacional (art.1), que sería presidida por el Director General de Bellas Artes, componiéndose de de los Vocales, nombrados por Real decreto a propuesta del Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: Tres individuos de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, otros tres miembros de la Real Academia de la Historia, el Jefe Superior del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, un representante de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y otro de la Junta facultativa de Construcciones Civiles, actuando como Secretario el Jefe de la Sección de Fomento de las

Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública (art.2). La Comisión realizaría su cometido en el término de cinco meses, comprendiendo su estudio no sólo los términos legales del problema, sino los medios económicos que sean precisos para su completa realización (art.3). Un paso primordial a la hora de redactar la Ley fue incluir en la Comisión al Jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio en virtud del **Real decreto de 22 de enero de 1926**, fundamentado como así aparece reflejado en la Exposición de Motivos en el hecho de que dicha ley debía *de ofrecer en su desarrollo y aplicación un aspecto jurídico que es preciso tener muy en cuenta al formar el cuerpo de doctrina que la constituya*, de lo que resultaba, por tanto, *de suma conveniencia que formen parte de la Comisión encargada de redactar dicha ley elementos especializados en procedimientos jurídicos, como es la Asesoría de este Ministerio, ya que, a mayor abundamiento, es este Departamento el llamado a ejecutar la ley de que se trata*. Durante la redacción de la ley sería consultado Vega Inclán por el Ministerio de Instrucción Pública contestando que era al mismo tiempo que era necesario adoptar medidas que impidiera la exportación de las obras más excepcionales, se estimulase un comercio interior de antigüedades al considerar que favorecía un amplio movimiento de cultura<sup>2899</sup>. Finalmente, sería promulgada el 9 de agosto de 1926, a modo de Decreto-Ley, por lo que no había alcanzado. Unos días después sería promulgada la **Real Orden circular de 24 de agosto de 1926** dirigida a los Gobernadores Civiles de las provincias para que hagan cumplir las disposiciones del Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, en el que se dispondría que *transmita esta Real Orden circular a los Presidentes de las Diputaciones Provinciales y a los Alcaldes, Presidentes de los Ayuntamientos para hacerles saber que, publicado en la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 15 del actual, el repetido Decreto-Ley, unos y otros son los que deben de velar por su más exacto cumplimiento, llamándole la atención acerca de los preceptuados en los artículos 14 y 15 y muy especialmente en los 17 y 23 para que se realice en el plazo marcado, lo que en ellas se ordena*. La nueva Ley constaría de tres títulos, el primero, *Concepto del Tesoro Artístico Nacional* de un solo artículo, el segundo, bajo la denominación de *Bienes Inmuebles. De la protección y conservación de la riqueza artística, histórico-artística de España y del carácter típico de sus pueblos y ciudades*, que estaría estructurada en veinte y uno artículos, y el tercero, con dieciséis, dedicado a *la riqueza mueble y exportación de la obra de arte*.

### **1.5. La aplicación obligatoria del Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 por Diputaciones y Ayuntamientos: La Real orden de 14 de noviembre de 1929.**

El cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 se convirtió en objetivo del propio Gobierno, por lo que promulgaría la Real Orden de 14 de noviembre de 1929, destinado especialmente a las autoridades locales, por lo que establecía que los Gobernadores civiles, los Presidentes de las Diputaciones provinciales y los Alcaldes presidentes de los

---

<sup>2899</sup> MENENDEZ FLORES, María Luisa *La huella del Marqués de la Vega Inclán en Sevilla*, Arte Hispalense, 85, Diputación de Sevilla, Sevilla, 2008, p.132.

Ayuntamientos, por sí y por el personal a sus órdenes, prestasen el auxilio y colaboración que de ellos solicitaren los Arquitectos nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para cada una de las zonas creadas por el Real decreto de julio de 1929 y por sus disposiciones especialmente encargadas de la conservación, restauración y conservación, restauración y formación del índice o catálogo de nuestra riqueza artística, histórica, monumental y pintoresca de España (1°); Que la Dirección General de Bellas Artes fuera facultada para solicitar de los Ayuntamientos, Diputaciones, pueblos, entidades públicas y todos los centros oficiales que dependiera del Ministerio de la Gobernación las relaciones de objetos y bienes muebles que deben presentar, conforme a los preceptos del Real decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 y de su Reglamento (2°); Que todas las Autoridades locales dispusieran siguiendo lo ordenado en el artículo 17 del Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, la confección de listas detalladas de los castillos, murallas, monasterios, ermitas, puentes, arcos, etc., y de sus ruinas, de cuya existencia en sus respectivas demarcaciones tuvieran noticia, estén o no declarados del Tesoro Artístico Nacional, y de expresar su situación y actual estado de dominio; el nombre de sus poseedores o la indicación de que están abandonados, y de formar relaciones detalladas también de la riqueza mobiliaria, artística o histórica, que tengan en su poder las Corporaciones, significando igualmente si son de su propiedad o si las tienen en depósito, así como de las que pertenezcan a otras entidades o particulares de que tuvieran noticias. (3°), para lo que debían ser remitidas al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, bien directamente o por conducto de los Gobernadores Civiles de cada provincia, Presidentes de las Comisiones Provinciales de monumentos históricos artísticos y en el término de seis meses, a contar de la publicación de esta disposición en el Boletín Oficial (4°). Todos los Ayuntamientos debían incorporar a sus Ordenanzas Municipales el contenido de los preceptos del Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, especialmente el de los artículos 8°, 14°, 18, 21, 22 y 23, pudiendo haber el caso de que si algún Ayuntamiento acordara la declaración de la ciudad que representa, como formando parte del Tesoro Artístico Nacional, conforme a los preceptos del Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, el acuerdo debía ser comunicado al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes dentro de los quince días siguientes al de la celebración del Pleno en que se hubiere tomado, acompañando a la comunicación en que el acuerdo se notificase la copia literal del acta de la sesión en la cual se adoptó y en cuanto al mismo acuerdo se refiere.

## **2. El triunfo del principio del intervencionismo del Estado como fundamento jurídico de la tutela pública del Patrimonio Monumental en la Exposición de Motivos.**

En la Exposición de Motivos se establece las circunstancias de la elaboración de esta Ley, aportando ya alguna de las novedades que



posteriormente se iría a desarrollar en el articulado, como pudo ser la fundamentación en los valores culturales: *Acordado por Vuestro Real decreto de 3 de noviembre del año próximo pasado el nombramiento de una Comisión especial, encargada de redactar un proyecto de Decreto-Ley relativo a la conservación de la riqueza histórico-artística nacional, que estimó necesaria para llevar a feliz término lo que entonces era decidido propósito del Directorio Militar, como lo es hoy del Gobierno de V.M., el de dedicar la más escrupulosa atención de nuestro gran tesoro artístico-histórico, que por deficiencias de legislación viene expuesto a continuo menoscabo; y nombrada al efecto dicha Comisión, que fue constituida por legítimos prestigios de nuestras Reales Academias y Centros oficiales, en directa relación con el tema de tan honroso cometido, presididos por el Director general de Bellas Artes, ha cumplido aquella su misión al cabo de detenida y concienzuda labor (...). En el preámbulo de la Soberana disposición antes citada, se expusieron los motivos de la misma, calificando de preocupación de Vuestro Gobierno no sólo el evitar la pérdida de cuanto encierra el solar patrio de interesante, histórico y bello, sino también la de procurar que sea admirado por propios y extraños, contribuyendo a conseguir que se conozca a España en las manifestaciones artísticas, muestra de su cultura. A continuación se procedía a resaltar la ineficacia que había precedido la actuación administrativa, haciendo hincapié a la falta de recursos económicos que se aplicaría a la protección del Patrimonio Histórico Artístico: *De poco han servido, señor, las leyes anteriores; no han tenido eficacia sus preceptos, que es tan grande nuestro acervo artístico nacional, tan rico en monumentos, y sus riquezas tan diseminadas por la prodigiosa fecundidad artística de nuestros mayores, que de atenernos a los preceptos y al espíritu dominante en que aquellas otras leyes que le precedieron fueron inspiradas o confiáramos demasiado en nuestros medios financieros, ahora y siempre en enorme desproporción con la riqueza que por imperativo debemos de conservar. Precisa, por tanto, señor la intervención directa y eficaz del Estado, si es que pretendemos fijar de una vez y para siempre la riqueza monumental de España al suelo de la nación.**

Al mismo tiempo se planteaba ya la intervención directa del Estado en el ámbito de la protección del patrimonio histórico-artístico, aunque siempre bajo el prisma de respeto del derecho de la propiedad de los particulares, y resaltándose una vez mas los valores estéticos e históricos de los bienes:(...) *El presidente que suscribe, atento a la consideración de los monumentos y a la belleza artística de nuestros pueblos y ciudades, en someter a la aprobación de V.M. este Decreto-Ley por la Comisión redactado, y que sin merma de los derechos dominicales y materiales del disfrute tiende a conservar, vinculado al patrio solar; adscribiéndoles al suelo los edificios bellos que en el pusieron la voluntad decidida y manifiesta de aquellos que quisieron perpetuar en los pueblos y campos por ellos elegidos esas hermosas y peregrinas fábricas, hijas del genio de sus autores, que supieron aprisionar en ellas, haciéndole suyo, el sentir de los siglos en que se levantaron aquellos otros monumentos rememoradores de culminantes hechos que el tiempo en su transcurso ennobleció, patinándolos como si quisiera con su lento y constante obrar, sólo por su contemplación y por razón de ella, dar título de prescripción, fehaciente y notorio, al disfrute espiritual que sobre ellos tienen los pueblos en que radican. En la propia Exposición ya se establecía los dos bloques temáticos de*

que se componía el corpus normativo: *En la primera tienen cabida los preceptos relativos a la conservación, custodia de las riquezas arquitectónicas, arqueológicas, históricas y artísticas de España y la clasificación y declaración de monumentos, ciudades y lugares pintorescos. Refiriéndose la segunda a las normas a que habrá de sujetarse la exportación y comercio de antigüedades, aun de aquellas en poder de particulares, normas que sin mermar su sagrada condición privada, haga esta condición compatible con los derechos del Estado para el fiel cumplimiento de uno de sus más elevados cometidos.*

### **3. Un nuevo marco administrativo: La reorganización de los servicios del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y la creación de la Junta de Patronato en virtud del artículo 37 del Decreto-Ley de 1926.**

La política centralista institucional supuso la reorganización del Ministerio de Bellas Artes a raíz de la publicación del **Real decreto de 16 de septiembre de 1924**. La Dirección General de Bellas Artes asumiría en su Sección 15: Fomento de las Bellas Artes. Asuntos relacionados con las Reales Academias de la Historia, Bellas Artes, Museo del Prado, Arte Moderno, y Artes Industriales, Museos provinciales de Bellas Artes, Museo del Greco, Romántico, etc. Monumentos Nacionales y Artísticos (...) Catálogo monumental y artístico. Excavaciones y antigüedades. Exportación de obras de arte. Asuntos generales de Bellas Artes; en su Sección 17, las Construcciones civiles y monumentos. Los asuntos relativos a obras de todas clases en los edificios de Instrucción pública y en los monumentos nacionales y artísticos, y en la Sección 18, lo correspondiente a Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos. La Administración provincial comprenderá los centros u organismos siguientes: los Museos estatales entre los que se encontrarían los del Prado, el de Arte Moderno, Arqueológico de Madrid, Arqueológico de Sevilla, Arqueológico de Reproducciones, Jardín Botánico y la Alhambra, a lo que uniría la Biblioteca Nacional, y los Archivos Nacionales como el Histórico Nacional, Alcalá, el de la Corona de Aragón, el del Reino de Valencia, el del Reino de Galicia, el de Simancas, el de las Ordenes Militares y el del Ministerio (art.4). Como Cuerpos Consultivos encontraríamos el Consejo de Instrucción Pública, las Reales Academias de la Historia, Bellas Artes de San Fernando, la Junta Superior de Construcciones Civiles, la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y Conservación de la Riqueza Monumental y Artística, la Junta de Iconografía Nacional, los Patronatos de los Museos del Prado, de Arte Moderno y Artes Industriales, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y la Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos (art.5). Al mismo tiempo serían creadas otras instituciones culturales como la Junta de Relaciones Culturales por Real decreto de 26 de diciembre de 1926, que tenía como objetivo estudiar los asuntos concernientes a la difusión del idioma español en el extranjero.

En el artículo 37 del Decreto-Ley de 1926 se constituiría una Junta de Patronato, bajo la presidencia del Director General de Bellas Artes para la protección, conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional. La modalidad institucional de la Junta de Patronato había aparecido ya en el R.D de 27 de julio de 1913, en el que se establecía el marco administrativo de los museos. Podemos afirmar tajantemente que con la creación de la Junta de Patronato habían triunfado los principios de intervencionismo estatal en la institucionalización administrativa del Patrimonio Monumental. Al Patronato se le dotaría de plena personalidad jurídica para adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes (art.37.2), siendo el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes quien dispondría las reglas que habrían de observarse para la adquisición de obras y objetos de antigüedad y arte con destino a los Museos del Estado provinciales y municipales (art.38). En su Exposición de Motivos ya se apreciaba el principio intervencionista que caracterizaba los fundamentos legislativos: *El Decreto-Ley para la defensa de la riqueza monumental y artística de España crea, por su artículo 37, una Junta de Patronato que, con carácter ejecutivo, habrá de velar por el estricto cumplimiento de los preceptos en aquél contenidos. Se daba al organismo un tinte tecnócrata fuera de toda pretensión política en sintonía con la organización administrativa del régimen militarista: Obedece su creación a la necesidad de un organismo que, con independencia de los burocráticos oficiales, les asesore, encauce y ordene en la ejecución de cuanto se refiera a la restauración, conservación y acrecentamiento del Tesoro artístico e histórico nacional. Habrá de ser integrado no sólo por personas de reconocida competencia demostrada en el ejercicio de profesiones libremente y por vocación elegidas a juzgar por el celoso afán con que las desempeñan, sino también por aquellas otras que, sin ser técnicos ni profesionales, ostentan, sin embargo, el supremo título de amor por lo histórico, tradicional y bello. No dudamos, Señor, que esta intervención ciudadana, lazo de unión entre las Autoridades oficiales que puedan suceder en la Administración del Estado, mantendrá la unidad de criterio y esfuerzo de absoluta e imprescindible necesidad en cuanto se refiere a la restauración y rescate de nuestro Tesoro artístico y contribuirá a la mayor eficacia del Decreto Ley y mejor conservación y custodia de nuestra riqueza monumental. De esta manera se establecería que el Patronato estaría formado por una Junta Central de Patronato en Pleno y un Comité ejecutivo permanente, presididos ambos por el Director General de Bellas Artes (art.1). Serían Vocales de la Junta Central en Pleno, el Obispo de Madrid-Alcalá; D. Jacobo Stuart Fritz James Portocarreo y Osorio, Duque de Alba y D. Jerónimo López de Ayala, Conde de Cedillo, Académicos de la Real de la Historia; D. Elías Tormo y Monzó y Don Mariano Benlliure y Gil, de la de Bellas Artes de San Fernando; D. Manuel Gómez Moreno, de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades; el Comisario Regio de Turismo; el Presidente de la Junta facultativa de Construcciones Civiles; D. Juan Moya e Idigoras, Profesor de la Escuela Superior de Arquitectura; Los Directores del Museo Nacional del Prado, del Arqueológico Nacional y de la Biblioteca Nacional; D. Félix Boix y D. José Francés, individuos de reconocido amor a las Bellas Artes; un individuo de la Sociedad*

de Amigos del Arte, y el Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.2), y la propia Junta propondría a los individuos que debían desempeñar los cargos de Vicepresidente y Secretario, que serían nombrados por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.3). Los Vocales del Comité Ejecutivo permanentes serían D. Jacobo Stuart Fritz James Portocarrero y Osorio, Duque de Alba; Don Elías Tormo y Monzó; el Comisario Regio del Turismo; D. Manuel Gómez Moreno; D. Juan Moya e Idigoras y F. Manuel Escribá de Romani, Conde de Casal, como individuo de la Sociedad Amigos del Arte, actuando de Secretario de dicho Comité D. Luis Pérez Bueno, individuo de la Comisión de Valoración para la exportación de objetos artísticos, que tendrá voz, pero no voto (art.4).

Unos meses después por el **Real decreto de 25 de junio de 1928** sería promulgado el Reglamento de atribuciones de la Junta Central de Patronato, quedando dibujado el organigrama así como sus atribuciones. De esta manera estaría formado por un Pleno y un Comité Ejecutivo permanente. El Pleno estaría constituido por un Presidente, el Director General de Bellas Artes, Dos Académicos pertenecientes a la Real Academia de la Historia, dos Académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un individuo de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, Uno de los Vicepresidentes del Patronato del Turismo, el Presidente de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, un Profesor de la Escuela Superior de Arquitectura, los Directores del Museo Nacional del Prado, del Arqueológico Nacional y de la Biblioteca Nacional, dos Individuos de reconocido amor a las Bellas Artes, un individuo de la Sociedad de Amigos del Arte y el Jefe de Asesoría Jurídica del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.1), asignándole facultades consultivas e informaría de cuantos casos y asuntos le fueran sometidos por el Comité ejecutivo permanente (art.5), especialmente las propuestas por medio de mociones, que serían dirigidas al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de cuantas iniciativas, de carácter general y técnico, juzgara de necesaria implantación y conservación del Tesoro Artístico Histórico Monumental de nuestra Nación, así como la aprobación de la Memoria anual de los trabajos realizados por el Comité ejecutivo que hubiera presentado dentro de la primera quincena del mes de enero de cada año (art.6). El Comité Ejecutivo Permanente, por su parte, lo formarían seis individuos del Pleno y un Secretario, presididos por el Director General de Bellas Artes. El cargo de Secretario habría de recaer necesariamente en uno de los individuos pertenecientes a la Comisión de Valoraciones, para la exportación de objetos artísticos, y tendría en las sesiones voz, pero no voto (art.2). Sus atribuciones ejecutivas ser limitarían al conocimiento y resolución de todos los asuntos, excepto aquellos especialmente reservados al Pleno por este Reglamento (art.9), teniendo por delegación y representación del Pleno una amplia gama de funciones, distinguiéndose entre las de Protección, de Conservación y de Acrecentamiento.

Las funciones de protección estarían centradas en 1º) La inspección de todos los servicios que tuviese relación con la riqueza monumental y artística de España; 2º) El examen de los proyectos e inspección especial de las obras que fuesen efectuados a los Monumentos declarados Tesoro Artístico Nacional, así como de todas cuantas fuesen ejecutados, aun en los casos de no estar declarados, fuesen realizados con fondos o subvenciones del Estado, provincia o municipio, consignados en Presupuestos ordinarios o extraordinarios; 3º) La Inspección de las obras que fuesen ejecutadas en los Monumentos Nacionales propiedad de Corporaciones o entidades públicas y de particulares autorizados al efecto por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y a su vez la inspección y vigilancia sobre la existencia, conservación y permanencia en España de todos los bienes muebles que constituyeran el Tesoro Artístico. Las Inspecciones serían realizadas por sí, por delegación o por medio de Comisiones colectivas o individuales o Patronatos nombrados al efecto. Las atribuciones de conservación estarían referidas a 1º) La clasificación de los Monumentos Nacionales, en función al destino reservados a los mismos, según fueran utilizados para el servicio público, prestasen un fin utilitario o que tuvieran que ser conservados en consideración a su importancia artística o valor histórico; 2º) La distribución de las consignaciones presupuestarias a propuesta del Ministerio que figuraran en los Presupuestos ordinarios y extraordinarios del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para la restauración y conservación de Monumentos y adquisiciones del Tesoro Artístico Nacional, que una vez fuera aprobada, fuera consignada en Real orden para los efectos de su ejecución; 3º) La determinación del criterio artístico que fundamentaría el trabajo técnico de los Arquitectos encargados de la restauración de los Monumentos Nacionales; 4º) La propuesta para el nombramiento y separación de los Arquitectos y suspensión de las obras que éstos realicen; 5º) El nombramiento de Delegados o Comisiones Provinciales delegadas del Comité Ejecutivo Central, para la inspección de las obras de un Monumento determinado o de todos los de una provincia o región; 6º) Se daba por primera vez un criterio técnico de prelación de ejecución de obras, ajustable a un plan anual de las obras en los créditos no detallados que figuraran en el Presupuesto, que en orden de prioridad sería: La inminente ruina del Monumento; Su importancia artística e histórica; la situación del Monumento en lugares más o menos frecuentados por el turismo; los Informes previos que debían realizarse a la ejecución de todos los proyectos de obras que hubieran de realizarse en los Monumentos declarados nacionales, y en los demás inmuebles del Tesoro Artístico Nacional, tanto de consolidación como de conservación, restauración y reparación, de tal modo que ninguna obra podrá ser aprobada sin este requisito; 7º) El establecimiento del Servicio adecuado a la custodia y defensa de todos estos bienes inmuebles y 8º) La determinación de los auxilios y subvenciones para las obras de conservación de inmuebles, que formando parte del Tesoro Artístico de la Nación, se realicen



en edificios dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, otros Ministerios, Provincias y Municipios. En cuanto a las funciones de acrecentamientos estarían las propuestas e Informes de expropiación y adquisición con fondos de Presupuestos del Estado, de Monumentos, edificios, ruinas, lugares de interés artístico, arqueológicos e históricos, sitios pintorescos, etc., y de bienes muebles con destino al Patrimonio Artístico Nacional, con cargo a dichos Presupuestos, bien sean ordinarios o extraordinarios. A estas funciones se unirían las estrictamente reglamentarias atribuidas a la Junta Central del Patronato por el Real-Decreto Ley de 9 de agosto de 1926, y por su Reglamento y las especialmente delegadas, conferidas al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y la Dirección General de Bellas Artes, por lo que la Junta de Patronato podrá encargar las obras de restauración de Monumentos a personas o entidades oficiales de reconocida solvencia artística, centrales o provinciales, o a Patronatos locales, cuya designación hubiera hecho el propio Ministerio a propuesta del Patronato Central. Otras funciones del Comité Ejecutivo tendrían un carácter consultivo, bien a través de redacción de informes que hubieran sido sometidos a su dictamen por su Presidente, a las que se unirían las de ejecución de obras perentorias y concesión de auxilios, en atención *al ruinoso estado de los edificios y en evitación de gastos mayores, con cargo a las cantidades consignadas en los Presupuestos ordinarios o extraordinarios del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.*

Una de las novedades más significativas fue la de intentar resolver los problemas de financiación de esta institución, para lo cual se dispondría una serie de recursos, bien mediante subvenciones que serían consignado en los presupuestos del Estado, bien a través de los bienes que fueran adquiridos mediante herencias, legados o donaciones particulares, bien por el importe de la venta de sus publicaciones y mediante los derechos por licencia de exportación, las multas que fueran impuestas por infracciones de el Decreto-Ley y el precio de las ventas que fueran declaradas nulas por incumplimiento de las disposiciones del mismo y aquellas que provinieran de la visita y custodia de los monumentos públicos (art.37.3). Este Patronato debería dar anualmente cuenta detallada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de todos sus trabajos y de la inversión o aplicación de sus recursos, pudiendo retener con cargo al ejercicio siguiente los que no hubiese invertido en cada año, ya que en ningún caso los ingresos que quedarán mencionados no podían confundirse con los del Estado ni aplicarse a objetos distintos de los que se señalan en este Decreto-Ley. La organización, atribuciones y funcionamiento del Patronato serían determinadas en el Reglamento de este Decreto Ley. En el artículo 13 del Reglamento se especificaría aun más los recursos económicos del Patronato, que serían las siguientes: 1º. Las subvenciones que consignen los Presupuestos del Estado, de la provincia o del Municipio, con destino al cumplimiento de aquellas atenciones que están encomendadas al Patronato; 2º

Los bienes que fueran adquiridos por herencia, donación o legado; 3º El importe de la venta de sus publicaciones especiales; 4º Los derechos que se recauden por licencias de exportación; 5º Las multas que se impusiesen por infracciones legales y reglamentarias; 6º el precio que fuesen declaradas nulas con arreglo a los preceptos del Real decreto-Ley y de este Reglamento; 7º) El producto de las entradas de visita a los Monumentos y cuanto de estos proviniese por razón de enajenación, venta de materiales, productos forestales, canteras, rentas o alquileres; 8º) La venta de fotografías, reproducciones, etc. de los Monumentos y de los todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecieran al Estado; 9º Los derechos de reproducciones fotográficas, vaciados, copias, etc. de los Monumentos y bienes que fueran propiedad del Estado y 10º Cualquier otro recurso que el Patronato propusiese y aprobase la Dirección General de Bellas Artes. Los fondos que resultasen sobrantes en las cuentas de cada año pasarían como primera partida de cargo a la cuenta del año siguiente. Se especificaría que todos los recursos y créditos que obtuviese la Junta de Patronato no podrían invertirse en fines distintos de aquellos que *correspondieran a la misión que le está confiada en el Real decreto-ley y en este Reglamento. Compras, rescate de inmuebles* (art.16). Del mismo modo el producto de las entradas de visitas a los Monumentos y lo que proviniese por cesión o enajenación, venta de materiales, productos forestales, canteras, rentas y alquileres, no podría ser destinado ni aplicado sino al mismo Monumento de donde procedieran o a aquellos otros de la provincia o región en donde aquél radique (art.14). El Comité ejecutivo Central redactaría una Memoria y formulará anualmente un presupuesto de ingresos y de gastos, rindiendo anualmente una cuenta general, justificada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art.17).

En virtud de la **Real Orden de 22 de junio de 1929** sería aprobada la propuesta formulada por la Junta del Patronato del Tesoro Artístico Nacional, de gastos con cargo a la consignación del vigente presupuesto del Ministerio para obras a realizar en los Monumentos declarados del Tesoro artístico Nacional, y para expropiaciones, siguiendo lo preceptuado en el artículo 10 del Reglamento del 25 de junio, especificando en su Exposición de Motivos que con estos gastos se atendía *principalmente a continuar, las obras en curso y a conceder auxilio inmediato para obras perentorias en atención al ruinoso estado de los edificios y en evitación de gastos mayores*. Los bienes inmuebles que se incluirían en esta primera partida serían: el Real Palacio de San Idelfonso (Segovia), para obras de proyecto correspondiente a la zona central, a los que se le sería asignados 250.000 pesetas; el Monasterio de Poblet (Tarragona), para obras y expropiaciones en ese Monumento y para otros de la provincia con una cantidad de 250.000 pesetas; La Mezquita de Córdoba, para obras en la Sala Capitular, 75.000 pesetas; El Palacete de la Moncloa (Madrid), para ultimar las obras, 50.000 pesetas; La Iglesia de Santa María del Naranco (Oviedo), para obras, 50.000 pesetas; la iglesia de Santa Catalina (Sevilla),

para ultimar las obras de consolidación, 50.000 pesetas; Santiponce y Mérida, para expropiaciones, 100.000 pesetas; El Corral del Carbón (Granada), para obras de consolidación, pesetas, 50.000; La Casa del Chapiz (Granada), para obras de consolidación, 50.000 pesetas; la Academia de Buenas Letras, de Barcelona, para las obras proyectadas, 49.960,29 pesetas; el Palacio de Sada, en Sos (Zaragoza), para obras de consolidación, 25.000 pesetas; La Iglesia de San Esteban de Segovia, para la terminación de las obras en curso, 20.000 pesetas; El Hospital de Santiago, de Ubeda (Jaén), para el proyecto parcial correspondiente a la sección segunda del total de reconstrucción de la torre de la izquierda, 49.954 pesetas y para comenzar la consolidación de una de las torres, 39.944 pesetas; La Iglesia de Santa María, la Real de Olite (Navarra), para obras de consolidación, 25.000 pesetas; La Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, para obras, 25.000 pesetas y para la terminación de las obras de la Sala de Chimeneas y adyacentes en el Palacio de Carlos V, pesetas 50.000.

Unos meses después en virtud de la **Real orden de 25 de octubre de 1929** serían dictados el procedimiento administrativo y la regulación de los recursos económicos que debía de seguir la Junta de Patronato del Tesoro Artístico Nacional *debe poseer para el cumplimiento de sus fines*. Se dispondría que aquellos Monumentos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional, que fuera propiedad del Estado, se designaría a un Administrador que tendría que llevar en los libros que estimase necesarios, cuenta detallada de los ingresos provenientes del producto de las entradas de visita y de cuanto de aquellos se obtengan por razón de enajenación, venta de materiales, productos forestales, canteras, rentas, alquileres o cualquiera otros conceptos, e igualmente llevará cuenta detallada de los gastos, sueldos, compras, etc. (art.1.1), por lo que en un plazo de los cinco primeros días de cada mes debía de remitir al Comité ejecutivo de la Junta de Patronato un estado-resumen de los ingresos y gastos correspondientes al mes precedente (art.2º). Al mismo tiempo el Habilitado-Pagador de la Contaduría en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, organizaría los Servicios de Contabilidad de la Junta de Patronato, con la apertura de los libros que fuesen necesarios, a fin de conocer exactamente el Debo y el Haber por cada uno de los siguientes conceptos: A) Los libramientos que le sean expedidos con cargo a las subvenciones consignadas en los presupuestos del Estado; B) Bienes adquiridos por herencia, legados o donaciones particulares, hecho a favor de los Monumentos o de la Junta del Patronato; C) El importe de la venta de publicaciones; D) Los derechos por licencia de exportación, multas y precio de ventas que declaren nulas; E) Los productos de entradas de visita a los Monumentos (art.4). Se especificaría que todos los recursos y créditos que constituyesen el patrimonio de la Junta de Patronato no podrían invertirse en fines distintos a la misión que les había sido confiada (art.5). Se regularía minuciosamente el destino de los recursos económicos adquiridos, por lo que el producto de las entradas de visita a los Monumentos *no podría ser destinado ni aplicado sino a atenciones*

*del mismo Monumento de donde procedan, o a las de aquellos otros de la provincia de donde aquel radicare, así como a la compra de muebles e inmuebles para incremento de su Tesoro artístico-histórico provincial* (art.6), teniendo que ser ratificado toda inversión o gasto por acuerdo firme del Comité Ejecutivo de la Junta de Patronato (art.7º) y en la primera sesión que el Comité ejecutivo celebrase en el mes de enero de cada año, el Secretario, con el Vº Bº del Presidente, tendría que elevar a la aprobación del Comité la cuenta general justificada de los ingresos y gastos del año precedente (art.9.1), por lo que una vez aprobada la cuenta general por el Comité ejecutivo, se rendiría, dentro del mismo mes de enero, al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, para su aprobación definitiva y remisión al Tribunal Supremo de la Hacienda Pública (art.9.2). Durante el mes de diciembre de cada año, el Secretario de la Junta de Patronato redactaría el presupuesto de ingresos y gastos para el año siguiente, y con el visto bueno del Presidente se elevaría a la aprobación del Comité ejecutivo, que debía quedar aprobado antes del día 31 de dicho mes de diciembre (art.10).

#### **4. Una nueva categoría jurídica: Monumentos inscrito en el Tesoro Artístico Nacional.**

##### **4.1. Los bienes que configuran los Monumentos inscritos en el Tesoro Artístico Nacional.**

Como podemos comprobar en su lectura, el artículo 1 de la Ley presenta una verdadera renovación jurídica en su planteamiento, al definir al Tesoro Artístico Arqueológico Nacional como *el conjunto de bienes muebles e inmuebles dignos de ser conservados para la nación por razones de arte y cultura*, intentando unificar todos los bienes que hasta ahora habían integrado el Patrimonio Monumental, que habían sido regulado indistintamente sin un criterio unificador. Siguiendo la tradición legislativa española se siguió tutelando los bienes inmuebles con una especial protección, como se refleja en el artículo 2 de la Ley, se definiría los bienes inmuebles que configuraba el Tesoro Artístico Nacional, entre los que se establecerían tres figuras específicas: los Monumentos, los Sitios Históricos y los Yacimientos y Objetos de interés paleontológico.

a) Todos los monumentos o parte de los mismos que, radicando en el suelo de la Nación, hayan sido declarados, antes de ahora, como monumentos históricos, artísticos, nacionales o monumentos arquitectónicos-artísticos, y los que se declaren en adelante como pertenecientes al Tesoro artístico nacional, ya sean propiedad del Estado, Provincia, Municipio, entidades públicas o particulares.

b) Las edificaciones o conjuntos de ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España,

siempre que así se haya declarado o en lo sucesivo se declare por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

c) Los yacimientos y objetos de interés paleontológico y prehistórico, las cuevas, abrigos y peñas, con pinturas rupestres los monumentos prehistóricos (megalitos y cuevas artificiales), en sus distintas especies; los campos de excavaciones acotados y deslindados, de acuerdo con los preceptos de la vigente Ley de Excavaciones y Antigüedades; y, en general, cuantos objetos tengan interés paleontológico, histórico, artístico, arqueológico o documental que haya sido reconocido o se reconozca en lo sucesivo.

*Los bienes inmuebles de carácter arquitectónicos-artísticos.*

En el artículo 3 precisaba aun más el concepto jurídico de Monumentos, donde se desglosan una heterogeneidad de bienes: *Se entiende por monumentos del Tesoro artístico no solo los edificios, ruinas, sitios, cuevas y abrigos (...).* Al mismo tiempo se preceptuaba una vez más los criterios valorativos del bien, donde se incluía a una valoración claramente de carácter pintoresco, los méritos artísticos y de antigüedad, tradicionales en la legislación del patrimonio histórico-artístico español, reconociéndose que cualquier estilo artístico podría: (...) *por ir unidos al recuerdo de alguna época o suceso de relieve culminante en la historia, merezcan tal declaración, sino además todos aquellos que por su mérito artístico o antigüedad, cualesquiera que sea su estilo.* Se incluía además la declaración formal: (...) *la obtengan, previa su declaración, de acuerdo con los preceptos de este Decreto-Ley.*

*La inclusión del tejido urbano de interés histórico y artístico.*

Los conjuntos de bienes inmuebles como identidad propia digna de ser protegidos serían recogidos en la legislación como una importante novedad en la legislación española, fundamentando su protección en la valoración artística y pintoresca, término este último propio de las reminiscencias románticas de la ideología artística, siendo obligada su declaración, por lo que se recalca el carácter formal: *Las edificaciones o conjuntos de ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España, siempre que así se haya declarado o en lo sucesivo se declare por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.*

*Los bienes muebles adheridos al inmueble.*

Una de las novedades más significativas en la construcción jurídica del bien a proteger, sería la tutela de aquellos bienes muebles que estuviesen adheridos al inmueble de interés histórico y artístico, como a parece reflejado en el artículo 4, que incluiría *cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo*



*hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén formados, y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico-artístico del inmueble a que están adheridos, por lo que se identificaba el mueble adherido al inmueble como una misma identidad a proteger, por lo que se intentaba así frenar los despojos patrimoniales de sus propietarios. También serían considerados como inmuebles, aquellos que aparecían enumerados en el art.334 del Código Civil. De esta manera se intentaba superar los problemas que habían sido generados tradicionalmente el no considerar como parte del conjunto aquellos elementos muebles como pinturas, esculturas u otros objetos que estuviesen adheridas al edificio, como había ocurrido en el caso de la venta de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga.*

*Inclusión de los Yacimientos arqueológicos y patrimonio paleontológico.*

Se volvería a incluir el Patrimonio Paleontológico y Arqueológico como bienes con una identidad específica a la que había que proteger, que aunque planteada ya anteriormente en la Ley de 1911, se abría el camino a nuevas variantes de patrimonio como fue el caso de la arquitectura megalítica: *Los yacimientos y objetos de interés paleontológico y prehistórico, las cuevas, abrigos y peñas, con pinturas rupestres; los monumentos prehistóricos (megalíticos y cuevas artificiales), en sus distintas especies(...)*. Las excavaciones arqueológicas volverían a ser objeto de regulación: *Los campos de excavaciones acotados y deslindados, de acuerdo con los preceptos de la vigente Ley de Excavaciones y Antigüedades (...)* a lo que se uniría un conglomerado heterogéneo de bienes.

*Un precedente del Patrimonio etnológico: la inclusión del horreo como patrimonio Monumental de carácter inmueble.*

En el artículo 9 de la Ley de 9 de agosto de 1926 al horreo, que le otorga la consideración de bien inmueble, teniendo en cuenta que desde 1863 la jurisprudencia le confería la categoría de bien mueble.

#### **4.2. La regulación de los bienes en el seno del régimen patrimonial.**

De la misma forma se intentaría paliar los conflictos jurídicos que habían ido suscitado las ventas de bienes tanto muebles o inmuebles no solamente a *los pertenecientes a instituciones de beneficencia*, cuyos bienes estaban regulados en el artículo 1º del Real decreto del Ministro de la Gobernación de 6 de julio de 1910, *sino también cuantos de naturaleza análoga figuren en el patrimonio de Fundaciones y Patronatos de toda índole, ya se trate de edificios o de sus elementos componentes, o de bienes muebles que, por voluntad de los fundadores o donantes, existan adscritos a los mismos, sirviéndoles o habiéndoles servido para su exorno, servicio o complemento* (art.5). Se intentaría aclarar cuáles eran los bienes inmuebles que pertenecieran a las entidades públicas, por lo que se entendería por ello aquellos que tuviesen *todos los de mérito arqueológico-artístico o de interés histórico en*

*poder del Estado, Provincia o Municipio, o aquellos otros propiedad de entidades o personas jurídicas a cuya conservación contribuya el Estado, la Provincia o Municipio, por consignaciones en sus presupuestos respectivos o por haber realizado o realizar en ellos obras de reparación, consolidación y restauración* (art.6). Sin embargo, como había ocurrido ya en anteriores ocasiones, la construcción jurídica del Patrimonio Monumental no estuvo exenta de una clara indeterminación, especialmente en el ámbito del valor monumental que fundamentaba su tutela, ya que junto a lo artístico se incluiría lo cultural como un nuevo valor digno de tutelar en los bienes. Como apunta *de esta manera se había introducido los nuevos criterios valorativos que iban a surgir en los planteamientos de los primeros años del siglo, por lo que como apunta Concepción Barrero el valor cultural se introducía como fundamento jurídico de protección adelantándose a la visión proteccionista de la legislación contemporánea, anticipándose en los principios y criterios que se habían desarrollado a nivel internacional de los bienes culturales, en la llamada Comisión Franceschini del parlamento italiano de 1966, y posteriormente en las teorías de Máximo Severo Giannini*. En los mismos términos podemos de J.M. Monterroso Montero (...) *La aportación más relevante de esta Ley de 1926 radica en la utilización del concepto de tesoro artístico-arqueológico nacional definido en su artículo I. Dicha definición supone, por una parte, la aparición de un concepto aglutinador bajo el cual se pueden encuadrar todos los bienes protegidos, ya se trate de yacimientos arqueológicos o bienes inmuebles, ya se refiera al patrimonio mueble o conjuntos históricos y, por otra, introduce, el criterio de “arte y cultura”, es decir de interés cultural como propiciador del acto de protección*<sup>2900</sup>. José Farina Tojo afirma que hasta el decreto ley de 9 de agosto de 1926 la protección del Patrimonio Cultural se reducía, en realidad, a la protección del patrimonio edificado, centrada de forma casi exclusiva en las arquitecturas aisladas. Es a partir de este Decreto-Ley, tan innovador en muchos aspectos, cuando se amplía al entorno urbano y a los conjuntos (...) se anticipó claramente a estos planteamientos y a la mayor parte de la legislación europea. Empieza, por tanto, a abrirse camino la idea de proteger, no solamente los cuadros, o las estatuas, o los edificios, sino también los entornos de los monumentos o incluso conjunto urbanos enteros<sup>2901</sup>. Por consiguiente, se ampliaba la idea de una concepción patrimonial no solamente valorada en un fundamento estético, sino también desde un plano cultural, aunque por supuesto con los matices que todavía a principio del siglo XX se identificaba con la idea de identidad cultural.

#### **4.3. Un nuevo procedimiento administrativo a raíz de la promulgación del Decreto Ley de 1926: La declaración del Bien inscrito al Tesoro Artístico Nacional.**

Con la promulgación del Decreto Ley de 1926 se formalizaría un nuevo procedimiento administrativo por el que se le reconocía la identidad jurídica

<sup>2900</sup> MONTERROSO MONTERO, J.M., pp.84-85.

<sup>2901</sup> FARÍÑA TOJO, José La protección del Patrimonio Urbano. Instrumentos normativos, Madrid, 2000, pp.17-18.

del bien a proteger, derogando implícitamente la ley de 4 de marzo de 1915, asumiendo su contenido y ampliándolos a los bienes muebles<sup>2902</sup>. Nuevamente como había ocurrido anteriormente se trataba de un acto formal que se realizaba mediante un expediente incoado por los organismos, entidades centrales o provinciales y personas capacitadas para ello por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; las Academias de San Fernando y de la Historia, la Junta Superior de Excavaciones, la Comisaría Regia del Turismo y las Comisiones de Monumentos; Gobernadores y Presidentes de Diputación de las Provincias donde el monumento radicase (art.19). En el caso de que la solicitud de declaración fuese realizada por los organismos y Autoridades locales y provinciales debían de hacerse por medio de las respectivas Comisiones provinciales de Monumentos, que debían incoar el expediente, en el cuál era inexcusable la inclusión de su Informe (art.19). Si el expediente fuese instruido por iniciativa de la Comisión de Monumentos, la petición debía ser formulada por el Presidente o dos de sus miembros, debiendo ser remitidos todos los expedientes a la Dirección General de Bellas Artes, para los informes que debían de elaborar las Reales Academias de San Fernando y de la Historia y la Junta Superior de Excavaciones, según procediese. En los procedimientos administrativos, además de las Reales Academias y la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, era preceptivo el informe favorable de la Junta del Patronato para la protección, conservación y acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional, que en caso de que fuera declarado Monumento Nacional se incluía el informe del Comité Ejecutivo de la Junta del Patronato, como ocurrió en la Necrópolis de Carmona. Una vez que informase pasarían al Patronato y al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para su definitiva resolución (art.19). El hecho no haber sido declarados como Monumentos inscritos en el Tesoro Artístico Nacional, por lo que aquellos bienes inmuebles que pertenecieran al Estado, Provincia o Municipio y los que fueran propiedad de entidad pública que no hubiesen sido declarados Monumentos del Tesoro Artístico Nacional, podían los Gobernadores, Presidentes de Diputaciones o Alcaldes a motu proprio o a instancia de la entidad central y las provinciales impedir cualquier obra que se pudiera realizar en el inmueble sin que hubiera solicitado permiso a las Reales Academias de San Fernando y de la Historia y a las Comisiones de Monumentos, con la subsiguiente incoación inmediata del expediente para que fuera incluido en el Tesoro artístico Nacional, exceptuando tan solo los trabajos para evitar la ruina inminente de los mismos (art.9).

---

<sup>2902</sup> GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier” La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)” *Revista Electrónica del Patrimonio Histórico*, 1, diciembre de 2007,

## **5. La tutela específica de los Bienes Inmuebles de interés histórico y artístico.**

### **5.1 La pervivencia de la declaración de Monumento Nacional y Monumento Arquitecto-Artístico y su inserción en el Tesoro Artístico Nacional durante la etapa del Directorio Militar.**

Un amplio número de bienes inmuebles sería declarado indistintamente como Monumento Nacional o Monumento Arquitectónico-Artístico entre 1923 y 1930, perviviendo de esta manera las categorías jurídicas declaratorias de etapas anteriores, aunque con la novedad de que a partir de la publicación del decreto de 1926 serían insertadas en el Tesoro Artístico Nacional. Anteriores a la publicación del Real Decreto de 1926 serían declarados los siguientes bienes:

- Real orden de 20 de septiembre de 1923 por el que se declaran Monumentos Arquitectónicos-artísticos el Claustro del Convento de San Francisco de Orense y la iglesia de San Pedro de Rocas, en aquella provincia.
- Real Orden de 5 de enero de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico la iglesia del Convento de Nuestra Señora de los Remedios, hoy Hospital Civil (Guadalajara).
- Real orden de 10 de enero de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico el templo y convento de las Bernardas (Alcalá de Henares, Madrid)
- Real orden de 11 de enero de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Monasterio de Nuestra Señora de Rueda (Escatrón, Zaragoza)
- Real Orden de 17 de enero de 1924 declarando Monumento Nacional la ex catedral de Roda (Huesca).
- Real Orden de 17 de enero de 1924 declarando Monumento Nacional la ex catedral de Roda (Huesca).
- Real orden de 4 de abril de 1924 declarando Monumento Arquitectónico-Artístico al castillo de Alcalá de Guadaira (Sevilla).
- Real orden de 25 de abril de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico las cuevas y abrigos con pinturas o grabados rupestres que se mencionan.
- Real orden de 14 de julio de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico la torre de la ruina de la derruida iglesia de San Pedro (Villa de Ayerbe, Huesca).
- Real orden de 14 de julio de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico el conjunto de la Plaza del Potro, de la ciudad de Córdoba.

- Real orden de 29 de julio de 1924 declarando Monumento Nacional el Claustro de la Colegiata de San Pedro y la iglesia de San Juan de Rabanera (Soria).
- Real orden de 5 de agosto de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico las ruinas de la iglesia románica de Santa María del Milagro y las del Anfiteatro romano, sitas en la ciudad de Tarragona.
- Real orden de 13 de agosto de 1924 declarando Monumento Nacional el puente de Alcántara (Cáceres) con el arco triunfal y el templo contiguo a su salida.
- Real orden de 22 de agosto de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico la iglesia de San Gil (Guadalajara).
- Real orden de 2 de septiembre de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico a la iglesia de Santa María de Gradefes (León).
- Real orden de 13 de septiembre de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Palacio-fortaleza de los Condes (Puentedeume, Coruña) (Gaceta de Madrid, Núm.261, 17 de septiembre de 1924, pp.1376-1377).
- Real orden de 15 de septiembre de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico la Casa-palacio que perteneció a la familia de los Sada, sito en Sos (Zaragoza).
- Real orden de 28 de noviembre de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico la Acrópolis sita en el Cabezo de Alcalá y demás ruinas en Azalia (Teruel).
- Real orden de 6 de diciembre de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico la capilla absidal románica de la Vera-Cruz (Maderuelos, Segovia).
- Real orden de 6 de diciembre de 1924 declarando Monumento arquitectónico-artístico la ermita o capilla de Maderuelos (Segovia).
- Real orden de 27 de diciembre de 1924 declarando Monumentos Nacionales las casas número 1 de la calle de Santa Lucía, y 10 de la del Paradis, ambas de la ciudad de Barcelona.
- Real orden de 31 de diciembre de 1924 declarando Monumento Arquitectónico-artístico el grupo de construcciones funerarias prerromanas, existentes en extramuros de la ciudad de Cádiz.
- Real orden de 17 de enero de 1925 declarando Monumento Nacional el Castillo-Palacio Real de Olite (Navarra) y la iglesia de Santa María la Real.
- Real orden de 19 de enero de 1925 declarando Monumento Nacional las ruinas de la antigua ciudad de Bolonia (Tarifa).
- Real orden de 27 de febrero de 1925 declarando Monumento Nacional la histórica casa-palacio que perteneció a la antigua



familia de los Sada, donde nació Don Fernando, el Católico, sita en Sos (Zaragoza).

- Real orden de 7 de abril de 1925 declarando Monumento arquitectónico-artístico el castillo de Trujillo (Cáceres).
- Real orden de 29 de abril de 1925 declarando Monumento arquitectónico-artístico la iglesia de Santa María (Lladó, Gerona).
- Real orden de 8 de mayo de 1925 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Arco romano que da acceso al puente de la villa de Martorell (San Feliú de Llobregat, Barcelona).
- Real orden de 26 de mayo de 1925 declarando Monumento arquitectónico-artístico el arco ojival, siglo XIV, que es una de las puertas de entrada a villa de Aguilar de Campóo (Palencia).
- Real orden de 15 de julio de 1925 declarando Monumento arquitectónico-artístico el claustro contiguo al templo parroquial de San Jerónimo (Madrid).
- Real decreto de 11 de agosto de 1925 declarando Monumento arquitectónico-artístico el Real Palacio de San Idelfonso (La Granja, Segovia)
- Real orden de 14 de agosto de 1925 declarando monumento arquitectónico-artístico la fortaleza del Macho, sita en el monte Urgull, de la ciudad de San Sebastián (Guipúzcoa).
- Real orden de 27 de agosto de 1925 declarando Monumento arquitectónico-artístico, conocido por Torra de les Punes de Manacor, isla de Mallorca (Baleares).
- Real orden de 2 de diciembre de 1925 declarando Monumento Nacional el sepulcro de D. Ramón Folch, duque de Cardona, sito en la iglesia de Bellpuig (Lérida).
- Real orden de 2 de diciembre de 1925 declarando Monumento Nacional la Capilla de San Isidro, adosada a la iglesia parroquial de San Andrés, de esta Corte.
- Real orden de 9 de abril de 1926 declarando Monumento arquitectónico-artístico del Castillo de Montesa, sito en la villa de su nombre.
- Real orden de 8 de mayo de 1926 declarando Monumento arquitectónico-artístico las iglesias de Santa María, San Pablo y San Nicolás de la ciudad de Ubeda (Jaén).
- Real orden de 3 de julio de 1926 declarando Monumento Nacional la iglesia, el Claustro, el edificio adjunto y el zaguán del Convento de San Juan de los Reyes, de Toledo.
- Real orden de 28 de julio de 1926 declarando Monumentos Nacionales el Arco de Bará y la Torre de los Escipiones, sitios en las afueras de la ciudad de Tarragona, y el llamado Pretorio de Augusto o Castillo de Pilatos, sitios en la misma ciudad.

A partir de 1926 los bienes inmuebles declarados formalmente serían incluidos en el Tesoro Artístico Nacional, en el que hemos incluido en el siguiente listado:

Real orden de 3 de diciembre de 1927 declarando Monumento arquitectónico-artístico adscrito al Tesoro Artístico Nacional, el edificio sito en Madrid denominado Palacio de la Moncloa.

Real orden de 10 de marzo de 1928 declarando Monumento Arquitectónico Artístico adscrito al Tesoro Artístico Nacional, la iglesia de la Pasión de Valladolid

Real orden de 29 de diciembre de 1928 declarando Monumento Nacional adscrito al Tesoro Artístico de España, la Catedral de Sevilla.

Real orden de 29 de enero de 1929 ampliando en la forma que se indica la declaración de Monumento Nacional que por Real Orden de 1º de mayo de 1879 se hizo del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres).

Real orden de 15 de marzo de 1929 declarando Monumento arquitectónico histórico-artístico, adscrito al Tesoro artístico Nacional, el Rollo de Villalón, sito en la Plaza Mayor de la Villa de Villalón de Campos (Valladolid).

Real orden de 6 de mayo de 1929 por lo que se declaran Monumentos arquitectónico-artístico, adscritos al Tesoro Artístico Nacional la llamada Casa de las Conchas y del Palacio de Monterrey, sitios en Salamanca.

Real orden de 18 de mayo de 1929 por lo que se declaran monumentos arquitectónicos-artísticos, pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional a los templos de San Lorenzo, el Salvador y San Pedro de Toro (Zamora).

Real orden de 25 de noviembre de 1929 disponiendo que se declare Monumento Nacional, adscrito al Tesoro Artístico Nacional, la Ermita de Nuestra Señora de las Viñas, antiguo suburbio de la ciudad de Lara (Burgos).

Real orden de 9 de noviembre de 1929 declarando monumento nacional adscrito al Tesoro Artístico de la Nación las ruinas del Monasterio de Carracedo (León).

Real Orden de 18 de febrero de 1930 declarando la Casa del Canto del Pico, sita en Torreldones (Madrid), Monumento Histórico-Artístico perteneciente al Tesoro Nacional.

Real orden de 16 de julio de 1930 declarando como perteneciente al Tesoro Artístico Nacional todos los monumentos prehistóricos tanto los Talayatos como las navetas y ruinas y murallas existentes o que se descubran en el Predio de Torre d'En Gaumés (Alayor, Menorca).

Real orden de 2 de julio de 1930 por el que se declara Monumento Nacional, adscrito al Tesoro Nacional, la Necrópolis romana de Carmona, propiedad del arqueólogo D. Jorge Bonsor.

Real orden de 4 de julio de 1930 declarando Monumento Arquitectónico Artístico, adscrito al Tesoro Artístico Nacional, la ermita de Santa María de la Vega, vulgo Cristo de las Batallas, sito en las inmediaciones de la ciudad de Toro (Zamora).

Real orden de 4 de julio de 1930 declarando Monumento Nacional inscrito en el Tesoro Artístico Nacional la iglesia de Santa María de Yermo, de la provincia de Santander.

Real orden de 4 de julio de 1930 declarando Monumento Nacional, perteneciente al Tesoro Artístico Nacional a la Mezquita de Santa María la Blanca (Toledo).

Real orden de 4 de julio de 1930 declarando Monumento Nacional a la iglesia de Santa María, situada en el lugar de Piasca, del término municipal de Cabezón de Liébana (Santander).

Real orden de 4 de julio de 1930 declarando Monumento Histórico-Artístico, adscrito al Tesoro Artístico Nacional, al Monasterio e iglesia de San Pedro de Roda.

Real Orden de 9 de agosto de 1930 resolviendo expediente en sentido contrario solicitando la Declaración de Monumento histórico artístico de la plaza de la Catedral de Oviedo con sus casas de soportales frente y al lado de la fachada de la iglesia y ante su torre.

Real orden de 9 de agosto de 1930 declarando Monumento Nacional adscrito al Tesoro Nacional el Arco Romano de Medinacelli (Soria).

Real orden de 25 de agosto de 1930 declarando Monumento del Tesoro Artístico Nacional partes de las murallas de Cáceres.

Real orden de 7 de noviembre de 1930 declarando Monumento arquitectónico-artístico, inscrito en el Tesoro Artístico Nacional a la iglesia parroquial de Santa Cruz de Castañeda (Santander).

Real orden de 9 de febrero de 1931 declarando Monumento Arquitectónico-Artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional el antiguo Convento de los Remedios de Sevilla.

En un primer momento podríamos tachar de ambiguo la declaración formal al no haber una distinción clara entre las distintas calificaciones. En el Informe de 20 de junio de 1925 de la Real Academia de San Fernando hecha sobre la necrópolis fenicia gaditana, se ponía en cuestión si con la declaración de Monumento arquitectónico-artístico bastaba para su protección o se entendía que se convenía llegar a la declaración de Monumento Nacional: *Consulta a la Academia la Superioridad si, declarada Monumento arquitectónico-artístico por Real orden de 31 de diciembre del año próximo pasado, la Necrópolis fenicia gaditana, sita en Punta de la Vaca, considera esta Corporación suficientemente garantías las sepulturas de referencia, o si entiende que conviene llegar a la declaración de Monumento Nacional, anteriormente propuesta por la Academia.* Se perfila nuevamente la diferenciación entre las dos categorías jurídicas de tutela del Patrimonio Monumental como había ocurrido en la etapa anterior, subrayando el carácter específico de cada uno de ellos: *Desde luego, ocurre que la diferencia de concepto en la declaración que de un modo o de otro sanciona el aprecio que el Estado hace de los monumentos, no está tanto en el mayor o menor mérito de los mismos cuanto en la eficacia de su conservación, pues cuando los declarados arquitectónicos-artísticos son de propiedad particular, el dueño queda obligado a conservarlos y no puede hacer en ellos reparaciones sin conocimiento y aprobación oficial, mientras que al Estado incumben esos deberes y cuidados cuando de los Monumentos declarados nacionales se trata. Importa, por lo tanto, tener en cuenta para estas declaraciones las circunstancias que concurren en los Monumentos a que haya de aplicarse el régimen de excepción que tales declaraciones suponen.* Se

apoyaba la Real Academia de San Fernando en el carácter único del inmueble para que sea declarado Monumento Nacional: *En el presente caso la Necrópolis fenicia gaditana, descubierta en los últimos años merced a sabias excavaciones, no es posible desconocer que por ser un Monumento arqueológico, único en el suelo de nuestra Península, y por la significación que en nuestra historia tuvo Agadir, es de un interés excepcional*<sup>2903</sup>.

En otras ocasiones se pone en entredicho la actitud de las propias instituciones a la hora de declarar un inmueble de interés histórico y artístico como Monumento Nacional, como fue el caso de la sinagoga del Tránsito de Toledo, en el que Mélida redactaría un amplio informe extrañándose que no hubiera sido designada anteriormente: *Extraño parecerá, por cierto, que tal declaración no se haya hecho hace tiempo, siquiera para enaltecer entre los monumentos españoles, un ejemplar arquitectónico tan justamente admirado por su originalidad y alto valor artístico. Verdad es que el caso no es único y que ha sido la costumbre formular tales declaraciones, las más de las veces, considerando aisladamente los Monumentos y con objeto de salvarlos de desaparición o ruina, más no conforme a un estudio comparativo que permitiese una selección de ejemplares congéneres*. En algunas revistas locales, como fue el caso de Toledo. Revista de arte, en un artículo titulado la Sinagoga Santa María la Blanca debe ser declarada Monumento Nacional, se incitaba el hecho de que al considerarse un patrimonio nacional debía de ser tutelada bajo dicha denominación<sup>2904</sup>. Finalmente ante la presión de las instituciones locales la sinagoga sería declarada Monumento Nacional el 4 de julio de 1930. Cabe mencionar el caso de la Real orden de 29 de enero de 1929 por el que se ampliaba la declaración de Monumento Nacional que se había concedido al Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres), *por Real orden de 1º de mayo de 1879, ya que habían surgido dudas acerca de la extensión de la referida Real Orden, por lo que hicieron precisa la intervención de las Reales Academias que en la citada declaración habían intervenido, por lo que tanto la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como la de la Historia, manifestaron que si bien la Real orden no menciona más que la Iglesia, el deseo y el espíritu tanto de ella como el de las citadas Reales Academias, fue el declarar Monumento Nacional todas las edificaciones que constituían la integridad del Monumento; añadiendo que siendo conveniente reforzar lo ordenado, solicitaban fuese ampliada en tal sentido la mencionada Real Orden, sugerencia a la que se uniría la Junta de Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza Monumental de España, por lo que se dispondría que todo el conjunto de edificaciones sería declarado Monumento Nacional, y no solamente la iglesia, quedando bajo la tutela del Estado y la inmediata inspección y vigilancia de la Comisión de Monumentos de Cáceres*.

---

<sup>2903</sup> Boletín de la Real Academia de San Fernando, Año XIX, Núm.75, Segunda época, Madrid, 30 de septiembre de 1925, pp.124-125.

<sup>2904</sup> PALOMARES SÁNCHEZ, Bárbara *Antigua Sinagoga de Santa María la Blanca*, Córdoba, 2009, p.186.

## 5.2. El deber de conservación de los Monumentos por parte del Estado.

El Decreto Ley de 9 de agosto del corriente año pone bajo la tutela del Estado el conjunto de bienes muebles e inmueble que constituyen el Tesoro Artístico Arqueológico dignos de ser conservados para la Nación por razones de Arte y Cultura. En dicha soberana disposición se fijan los preceptos para hacer efectiva la protección del Estado y conseguir la conservación de la riqueza arqueológica, histórico-artística de España y del carácter típico de sus pueblos y ciudades, así como de cuanto pueda ser transmitido de mano a mano, formado un todo determinado y concreto, cualquiera que sea su propietario, materia y forma y corresponda a producciones de las Bellas Artes en sus diversos y estilos, de autores anteriores a 1830, que sea interesante conservar en bien del Tesoro Artístico Nacional.

### 5.2.1. Los proyectos de adaptación y reforma de inmuebles de interés histórico y artístico.

Todos los proyectos de adaptación y reforma de inmuebles de interés histórico y artístico en principio estarían tutelados por el Estado, siendo autorizada mediante la aprobación de un real decreto, aprobando el proyecto del arquitecto de conformidad con el dictamen emitido por la Junta Facultativa de Construcciones Civiles del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en consonancia con las establecidas en el Real decreto orgánico de dicho servicio en aquel Departamento de 4 de septiembre de 1908. Las obras se ejecutarían en subasta, donde se establecían el coste económico del mismo, a pagar en mensualidades. Una interesante disposición fue la **Real orden de 31 de agosto de 1926** declarando que para la celebración de subastas y de los contratos que tengan por objeto la ejecución de las obras y servicios de este Ministerio, que se comprendan en el presupuesto extraordinario, no serán necesarias las consultas previas que exigen los artículos 57 y 67 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública; y exceptuando de las formalidades de subastas o concurso público las obras de conservación y restauración de Monumentos artísticos o históricos. Se dispondría que para la celebración de las subastas y de los contratos que tuvieran por objeto la ejecución de las obras y servicios del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que aparecieran comprendida en el presupuesto extraordinario aprobado por el Decreto-Ley de 9 de julio del año actual, tanto en el servicio de construcción de edificios-escuelas como en el de otros edificios de enseñanza y de los monumentos artísticos e históricos, no serán necesarias las consultas previas que los artículos 57 y 67 de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública exigen para realizar obras cuyo importe excediera de determinado límite o cuya ejecución hubiera de durar más de un ejercicio económico (art.1), exceptuándose de las formalidades de subasta o concurso público las obras de conservación y restauración de monumentos artísticos e históricos que por sus condiciones especiales debían ejecutarse por



administración en una o más anualidades y cualquiera que sea la cifra del presupuesto (art.2.1), requiriendo siempre el informe favorable de la Junta facultativa de Construcciones Civiles (art.2.2). La aprobación de los proyectos de obras que debían realizarse en los monumentos artísticos e históricos y la autorización para ejecutarlas directamente por la Administración se hará por Real decreto acordado en Consejo de Ministros, cuando el presupuesto importe más de 50.000 pesetas y por Real orden si fuese menor de dicha cifra (art.3). El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes remitiría al Tribunal Supremo de la Hacienda pública, la relación de las obras que se encontrase en cualquiera de los casos expresados en los artículos anteriores y con sujeción a la clasificación que de ellas se hiciese en el presupuesto extraordinario (art.4). Una vez realizada la intervención crítica del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, quedaba autorizado el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes para ordenar la ejecución de las obras en la forma que previenen las disposiciones de este Decreto (art.5). De esta manera se reformularía la aprobación de un amplio número de proyectos como podemos comprobar en la lectura del *Real decreto de 7 de septiembre de 1926 aprobando el proyecto redactado por el Arquitecto D. Ricardo García Guereta para obras de consolidación de la Torre del Gallo de la Catedral Vieja de Salamanca, declarada Monumento Nacional*, el **Real decreto de 20 de septiembre de 1926** aprobando los proyectos y presupuestos que se indican para las obras de consolidación y restauración de las agujas de la Catedral de Burgos y las de la Torre de San Martín, de Teruel, el Real decreto de 17 de diciembre de 1926 aprobando el proyecto y presupuesto para las obras de consolidación y restauración del Claustro grande de la Cartuja de Jerez, declarada Monumento o el Real decreto de 17 de diciembre de 1926 aprobando el proyecto y presupuesto para las obras de terminación de la fachada Sur de la Catedral de Sevilla, en la que se autorizaban las obras en virtud de los artículos 2º y 3º del Real decreto de 31 de agosto de 1926, por lo que las obras se llevarían a efecto por el sistema de administración. Al mismo tiempo cabe mencionar que por la **Real orden de 25 de junio de 1926** quedaría suprimido el Servicio de Construcciones Civiles del Ministerio de Instrucción Pública.

En el ámbito de la conservación de Monumentos también cabe hacer mención, aunque de manera anecdótica de una serie de disposiciones normativas en las que se defendía la identidad del bien a tutelar como fue la promulgación de la **Real orden de 16 de agosto de 1924** disponiendo que en el exterior de todos los edificios declarados Monumentos nacionales o arquitectónicos-artísticos y en la parte más visible de los mismos, se coloque una lápida, placa o cartela en la que se haga constar dicha declaración, en la que se hiciera constar dicha declaración, indicando su fecha en los primeros y respecto de los segundos el número que tengan en el Registro censual de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (art.1). Curiosamente la colocación de la lápida, placa o cartela sería de cuenta de las entidades o

personas que sean propietarias del inmueble o que sobre él ejerciten actos de posesión (art.2). Otra disposición de respeto a la identidad del Monumento tutelado sería la promulgación de la **Real orden de 28 de julio de 1924** disponiendo que en lo sucesivo, a toda instancia de entrada en los Monumentos Nacionales o arquitectónicos-artísticos dirigida al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes con finalidades cinematográficas, se acompañarán dos copias del argumento y epígrafes narrativos o leyenda de todos sus cuadros. La causa de esta medida estribaba como así aparece reflejado en la Exposición de Motivos en que *de algún tiempo a esta parte viene advirtiéndose, con dolorosa frecuencia, en la producción cinematográfica que se lleva a la pantalla en el extranjero y que reproduce aspectos de la vida española, singularmente de carácter histórico, un falso concepto de la realidad, que si lamentable en cuanto entraña una ligereza de preparación, lo es más y digno de toda censura por lo que significa de intención desaprensiva de buscar a toda costa un efecto, aunque para ello sea preciso atropellar la verdad, nuestra propia representación diplomática en el extranjero ha concluido por llamar la atención de los Poderes Públicos, al efecto de que, con pretexto de dar a conocer los monumentos artísticos de nuestro país, se inventan películas calumniosas de sus hechos históricos, de sus costumbres, de sus tipos, de su desarrollo cultural, y que, por consiguiente, nos denigran ante los extraños*. Las peticiones se resolverían a reserva de que el Gobernador de la provincia respectiva, asesorado del Presidente de la Comisión de Monumentos, estime que la impresión de películas no ocasiona perjuicio para el Monumento (art.2). La autorización de entrada en los Monumentos, al efecto de impresionar lugares para películas, se otorgará en cada caso de Real Orden. Se crearía asimismo un nuevo organismo institucional de conservación de los monumentos como fueron los Conserjes y los Guardas de Monumentos con la publicación del **Real decreto de 24 de noviembre de 1924**, que como así aparece en su Exposición de Motivos habría venido a sustituir a los antiguos Conservadores encargados de tal misión de custodia, con el mismo carácter y finalidad de velar por los edificios a que el Estado otorga tan alta jerarquía.

### 5.2.2. La utilidad pública del monumento.

En el artículo 7 se recoge una importante novedad que ya había aparecido en otras legislaciones extranjeras contemporáneas, y que prescribe la nueva concepción social que iba a asumiendo el Estado Liberal en este momento. Así se establece que: *Se declara de utilidad pública la conservación, protección y custodia de los monumentos arquitectónicos que forman parte del Tesoro histórico-artístico de la nación, así como la defensa del carácter típico y tradicional de pueblos y ciudades que por su importancia lo merezcan*. En la misma línea se puede insertar el artículo 11 cuando establece que *Todos los monumentos arquitectónicos comprendidos en el presente Decreto-Ley serán conservados para la nación(...)* Al mismo tiempo el Estado podrá expropiar por causa de utilidad pública, como así establece en el artículo 12 de la Ley.

### 5.3. Los límites de la disposición de un bien inmueble de los propietarios privados en virtud de la ley de 1926.

La Ley de 1926 va a disponer una serie de obligaciones al propietario, por lo que limita el uso del derecho a la propiedad privada. La obligación de conservar del propietario se convierte en uno de los pilares de la protección del patrimonio histórico-artístico, aunque también se extiende a las instituciones públicas, tal como podemos contemplar en el ya citado artículo 11: (...) *serán conservados para la nación (se refiere a los Monumentos), correspondiendo tal deber a sus respectivos dueños, poseedores o usufructuarios, ya sean éstos el Estado, provincia, municipio, entidad de carácter público, fundaciones, patronatos o particulares. No pudiendo realizar intervención de ningún tipo, sin la autorización del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: (..) no pudiendo, en consecuencia, alterar su estructura interior o exterior en el todo, en las partes, sitios, habitaciones, patios o fachadas, etc. previamente determinados y detallados al hacer la declaración de Monumentos, sin la expresa autorización, que concederá en cada caso el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con los requisitos y trámites que en el Reglamento de este Decreto-ley se establezcan.*

#### 5.3.1. El traslado de los inmuebles de su sede original.

Una de las prácticas más habituales por parte del propietario privado fue no solo su adquisición sino el traslado de su sede original, que en principio quedaba limitada en caso de exportación, no así en el interior del país, que en cierta manera había quedado autorizado por la Ley de 1915. En 1919 en el debate del Senado se pondría en entredicho el derecho de la disposición del Duque del Infantado, sobre las ruinas del convento de San Francisco de Segovia, que había adquirido a su legítimo propietario, el Ministerio de la Guerra, que pretendería para una mejor conservación trasladarla a Madrid, oponiéndose a ello un amplio sector de la opinión pública. El Duque del Infantado defendería su actitud con el pretexto de salvar un bien inmueble que estaba prácticamente abandonado: *¿Dónde está más dignamente apreciada esa riqueza arquitectónica al aire libre de un cuartel militar o decorando exteriormente una fachada enfrente del Museo de Pinturas? (...) ¿Prefieren ver esta iglesia reconstruida en Madrid o volando por los aires gracias a un cartucho de dinamita?*<sup>2905</sup>. En algunos casos se dispuso favorablemente que el dueño de unas ruinas pudiera trasladarla de su ubicación original como fue el caso de las ruinas de antigua iglesia del Pilar en Girona por **Real orden de 26 de abril de 1926**. El motivo se fundamentaba en la instancia realizada por Guillermo de Pelleja, Marqués de Monsolis, en noviembre de 1925, al Ministerio, haciendo constar que *siendo dueño de la iglesia del Pilar, del barrio del Pedret, y siendo su emplazamiento entre la carretera y la línea del ferrocarril, con la trepidación producida por el paso de los trenes se estaba derrumbando y siendo el motivo de su compra su traslado y reedificación en terrenos de su propiedad, solicitaba el oportuno permiso para el desmontaje y reconstrucción*, instancia que pasó a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades para que, unida al expediente que obraba en su poder, se emitiera el informe reglamentario. El 13 de marzo de 1926 la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades informó *que había tenido en suspenso el*

---

<sup>2905</sup> Sesión del 8 de agosto de 1919, Senado, p.1020.

*expediente acerca de la declaración de Monumento arquitectónico de las ruinas de la iglesia y convento del Pilar, del barrio del Pedret, de la ciudad de Gerona, por no haber remitido el Ayuntamiento las fotografías que se le pidieron y que la Junta creía precisas para emitir su informe, al mismo tiempo que tenía elementos de juicio, por lo que podía manifestar que se trata de una iglesia y convento erigidos hacia la mitad del siglo XV, correspondiendo al estilo ojival, en inminente ruina, acentuada por apoyar el terraplén de la línea de ferrocarril en el ábside de la iglesia, y que aun cuando hubiera visto con gusto que el Monumento hubiese quedado en el sitio para el que fue construido, la costosa separación que había que efectuar y que la importancia del Monumento no lo merece, la hace proponer su derribo y reconstrucción en la forma y en lugar que solicita su propietario.* Al ser la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades la entidad facultada para formular propuestas de declaración de Monumentos arquitectónicos-artístico, conforme al Real decreto de 25 de agosto de 1917, y siendo el Marqués de Monsolís propietario de la iglesia y Convento del Pilar, que había dado cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3º de la ley de 4 de marzo de 1915, solicitando el oportuno permiso para derribar y reconstruir el edificio de que se trata, al mismo tiempo que al tratarse del derribo de un edificio para su reconstrucción en territorio nacional no debía de proceder al ejercicio del derecho de tanteo para la compra del mismo, como así preceptuaba el artículo 2º de la mencionada Ley. Se autorizaba por consiguiente fundamentada en el artículo 2º de la Ley de 4 de marzo de 1915, al dueño del inmueble, Guillermo de Pallejá, Marqués de Monsolís, el desmontaje y reconstrucción de la nave, ábside, bóveda y otros elementos *que integran dichas ruinas en la finca*, que también eran de su propiedad. La reconstrucción debía de hacerse conservando el carácter y estilo del monumento y bajo la vigilancia de la Comisión provincial de Monumentos de Gerona (2º), renunciando a los beneficios y subvenciones que el Estado concedía a los particulares que se comprometían a la conservación, restauración o reconstrucción de monumentos históricos o artísticos, según preceptúan los artículos 4º al 8º de la referida Ley de 4 de marzo de 1915 (3º).

**5.3.2. El deber del propietario de respetar la identidad del Monumento: La potestad del Estado a la expropiación del bien inmueble adscritos al Tesoro Artístico Nacional de propiedad privada.**

La libre disposición y uso por parte del propietario sobre su bien inmueble quedaba limitado con la promulgación del Decreto-Ley de 1926. Cualquier transformación que el propietario quisiera, como *el derribo ni hacer obra alguna de modificación ni reparación en los edificios sometidos a expediente declarativo de Monumento nacional del Tesoro Artístico*, tendría que contar la autorización administrativa subrayando que solamente bastaría para impedirlo *la simple notificación hecha por medio del gobernador de la provincia, alcalde o presidente de la Diputación, o persona por ellos, autorizada al propietario del mismo, de haber comenzado la tramitación de dicho expediente por la Comisión de Monumentos.* La única obra que podría realizarse sería la correspondiente a la consolidación del inmueble en caso de

ruina (art.14). De igual forma se prohibiría igualmente la transformación, adosamiento, apoyo y vivienda hechas o intentadas en murallas, castillos, solares y ruina de cualquiera clase de monumentos. Las edificaciones consignadas en este artículo serán reputadas como clandestinas e inmediatamente demolidas, y los autores de ellas –propietarios y ejecutantes– así como todos los que extraigan materiales, incurrirán en las responsabilidades que determine el Reglamento (art.18). La potestad del Estado llega incluso a considerar la expropiación del inmueble en el caso de que el bien no esté en buenas condiciones de conservación, una vez que hayan sido requeridos los propietarios para poner las medidas pertinentes para su conservación, y no habiéndolas cumplidos, como se preceptúa en el artículo 12: *Cuando los edificios y ruinas declarados pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional no estuviesen debidamente atendidos en su conservación o se pretendiera realizar en ellos obras que puedan alterar su belleza o desnaturalizar su aspecto característico o estuvieran amenazados de desaparición en totalidad o en parte, se requerirá a sus propietarios para que procedan a la reparación o consolidación de los mismos, fijándoles un plazo en que habrán de ejecutarlos. De no haberlas realizado en el plazo marcado, el municipio, la provincia y el Estado podrán optar por ejecutar por sí mismos la consolidación de que se trata o por la expropiación del inmueble, previo a los trámites reglamentarios y oído el parecer de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. Al mismo tiempo, la capacidad de expropiación por parte del Estado se extiende a aquellos edificios: (...) que impidan la contemplación o dañen a un monumento del Tesoro Artístico nacional, los adosados a murallas, castillos, torreones, etc., así como los enclavados, rústicos o urbanos, en recintos del Estado que pertenezcan al tesoro artístico nacional* (art.12.3). En caso de que fuese oneroso, la conservación del bien para el propietario, el Estado prevería su intervención en las obras o su expropiación, como establece el artículo 13: *Si la conservación de un monumento histórico-artístico fuese manifiestamente onerosa para el dueño o si por obras de urbanización realizadas por el Estado, provincia o Municipio adquiriese dicho Monumento Histórico-Artístico un valor superior al suyo original y, como consecuencia de ello, se alegase por el propietario la pérdida que supondría para sus intereses la conservación de aquél en la forma actual y pretendiese su transformación para obtención mayor lucro, el Estado podrá optar por la expropiación del edificio o por la intervención en las obras de transformación y reforma propuesta por el propietario, a fin de que no se altere en aquel su aspecto típico y característico.* La expropiación se haría siguiendo el procedimiento administrativo dispuesto en los artículos 186, 187 y 188 del Estatuto Municipal.

### **5.3.3. La autorización de concesiones: El usufructo de los bienes inmuebles adscritos al Tesoro Artístico Nacional.**

El Gobierno podría ceder la custodia y conservación de los monumentos a Corporaciones, entidades o particulares, que se considerasen que ofreciese garantías necesarias, previo haber estudiado los informes convenientes, por lo que se debía de aprobar por el Ministerio de Instrucción Pública. En caso de que el concesionario no actuase con respecto al bien con la



debida diligencia, según el artículo 15, o realizase *obras que los desnaturalizase su condición característica y natural*, el Gobierno, a propuesta de los Gobernadores Civiles, o Academias de la Historia o de Bellas Artes, anularía la concesión y la ocupación del edificio. Una vez anulada, no se podría entablar recurso alguno. En el artículo 16 se establece la posibilidad de conceder la custodia de monasterios, conventos, castillos, y sus ruinas a particulares por parte del Estado. Los concesionarios tendrían que asumir la obligación de conservarlos, aunque en caso de que resultaran las obras de mantenimientos muy costosas, tendrían derecho como compensación, a la transmisión del inmueble por un lapso de tiempo que no excederá de noventa y nueve años, quedando a su transcurso todas las obras realizadas en el de la propiedad del Estado, Provincia o Municipio, sin que por razón de ellas pueda el concesionario o su causahabiente pedir indemnización alguna. Los monumentos entregados gozarían durante este periodo de la excepción del pago de todo impuesto nacional, provincial o municipal (art.16.2). Serían entregados por medio de un acta que se haría constar las condiciones de tal cesión y con los requisitos que establezca el Reglamento para la aplicación de este Decreto-Ley (art.16). Se establecería por obligación que los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Arquitectos de Instrucción Pública e Ingenieros Catastrales, debían remitir por mediación de las respectivas Comisiones de Monumentos la lista detallada de los castillos, murales, monasterios, ermitas, puentes y de sus ruinas en un plazo que no excediera de tres meses, a contar desde la publicación de la Gaceta, en la que debía de constar su situación y actual estado de dominio, el nombre de sus poseedores, su abandono si lo tiene conocido y las edificaciones en ellos hechos o adosadas (art.17).

En base al decreto Ley de 1926 se dispondría por **Real decreto de 6 de octubre de 1929** la cesión del patio, claustro y anexos del Convento de Santo Domingo de San Telmo al Ayuntamiento de San Sebastián, concediéndole el usufructo, custodia y conservación, por un plazo de noventa y nueve años, a contar de la fecha de la entrega (art.1), por lo que el Ayuntamiento de San Sebastián quedaba obligado a instalar en el inmueble cedido los Museos de Bellas Artes y Arqueológicos, Biblioteca Pública y cuantos servicios culturales dependan del citado Municipio, así como reservar un local para sala de reuniones y despacho de la Comisión provincial de Monumentos de Guipúzcoa (art.2). La entrega se efectuaría mediante la correspondiente acta, en la que se haría constar las condiciones de la cesión y la obligación que adquiriría la Corporación Municipal (art.3). De la misma manera el Estado se podía negar a la devolución de bienes inmuebles declarados Monumentos Nacionales, como podemos contemplar en la promulgación de la Real orden de 25 de noviembre de 1930 por el que se niega la devolución y reversión a la Orden de los Dominicos del edificio de San Gregorio de Valladolid, declarado Monumento Nacional. La Corporación Religiosa fundamentaría la petición en que el

antiguo Colegio fue destinado a estudios mayores de la Orden, habiéndose incautando el Estado de dicho edificio por la exclaustración y destinado a diferentes usos que demostraron no adaptarse el monumento a ningún otro uso que no fuese el de su fundación. La Orden dominicana se había dirigido al Ministerio de Hacienda, en 18 de mayo de 1927, solicitando se otorgase a la Orden la restauración y usufructo del edificio, y que dicho Ministerio de Hacienda, considerando que dicho edificio de San Gregorio era monumento nacional, acordó poner a disposición del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el indicado edificio, por formar parte del Tesoro Artístico Nacional, formalizándose la entrega en 12 de noviembre de 1927. Se dispondría a su vez que *elevado expediente a la Superioridad para su resolución, ésta determinó pasase a Consejo de señores Ministros, conforme a los preceptos de la Ley de 9 de agosto de 1926.* La denegación sería fundamentada en el hecho de que *el cuidado de un Monumento Nacional, si puede confiarse a una entidad, puede libremente negarse, según el Decreto-Ley de 1926, y que eso procede hacer, tratándose de monumento íntegro y conservado, situado en una capital y su recinto urbano en unas condiciones de aprovechamiento, a lo que se añadiría la falta en Valladolid de edificios necesarios para los fines culturales, obligaciones para este Ministerio, singularmente los de Bellas Artes, que en tan singular monumento podrían situarse con la máxima garantía de su conservación artística y deleite del público y los turistas.*

#### **5.4. La tutela específica del Generalife en el Directorio Militar: El triunfo del intervencionismo centralista de la Administración tutelar en el Directorio Militar.**

La política centralizada de la administración tutelar del Patrimonio Monumental propia de esta etapa tuvo un buen reflejo en la tutela específica de la Alhambra, concretamente en el recinto del Generalife, al quedar disuelto *el Patronato* que lo regía, con la promulgación del **Real decreto de 14 de marzo de 1925** declarando disuelto y disponiendo que la Dirección general de Bellas Artes se haga cargo de la administración, custodia, conservación, cuidado y restauración. El principio intervencionista del Estado quedaría patente en la propia Exposición de Motivos: *Como consecuencia de la transacción que puso término a un largo pleito entre el Estado y el Marquesado de Campotejar sobre propiedad del Generalife de Granada y de sus jardines y terreno adyacentes, quedó la Administración de dicho patrimonio encomendada a un Patronato dependiente del Ministerio de Hacienda, sin que hubiese quizá para ello otra razón que la de que, corriendo a cargo de dicho Ministerio todos los pleitos que tiene el Estado y habiéndose adquirido la propiedad del Generalife y sus anejos como consecuencia de un pleito, se estimase más fácil y hacedero dejar su administración bajo la dependencia del indicado ramo que transferirla al Departamento de Instrucción Pública y Bellas Artes, que era y es donde realmente tiene su lugar adecuado.* La disolución del Patronato no quedó exentos de elogios por parte del propio Gobierno, pero se consideraba más apto para su conservación un criterio uniformador en la administración de la Alhambra, por lo que dispuso que el

Generalifetanto por el arte a que pertenece, como su mismo emplazamiento (...) no debe ser considerada con separación ni sometida a otro régimen diferente que el de la Alhambra, evitando al mismo tiempo la duplicidad de gastos que la administración separada de dos obras artísticas de tan homogénea naturaleza viene ocasionando en la actualidad; y como por Real decreto de 23 de abril de 1915, el cuidado y conservación de la Alhambra de Granada se encomendó inmediata y directamente a la Dirección general de Bellas Artes, parece lo más adecuado, tanto para evitar gastos innecesarios como para armonizar e inspirar en un mismo criterio la conservación y reparación de las dos mencionadas obras de arte, transferir la administración del Generalife al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, poniéndole bajo el Patronato del mismo Centro directivo que tiene a su cargo la conservación y cuidado de la Alhambra. En base a esta unificación administrativa se dispondría por consiguiente, que se haría cargo de la administración, custodia, conservación, cuidado y restauración del expresado monumento, así como también de los jardines y terrenos que le rodean, la Dirección general de Bellas Artes(art.1), para lo que por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se adoptarían las medidas procedentes para que los proyectos de obras en el Generalife y los recursos con que éste cuenta se refundarían en el plan y presupuesto que habían para la Alhambra de Granada (art.2). Unos meses después, se dispondría por la **Real orden de 29 de abril de 1925 que Leopoldo Torres Balbas como Arquitecto-Conservador de la Alhambra, tomara posesión del Generalife, en nombre del Ministerio.**

Un caso excepcional dentro del recinto de la Alhambra sería la tutela específica de la Casa de Tiros (Granada), al ser entregada a raíz de la *Real Orden de 28 de febrero de 1926 a la Comisaría Regia de Turismo, para su custodia y conservación del edificio*, situación atípica que se deducía como así aparecía en la propia Exposición de Motivos, *del contenido de la base 5º del documento formalizando la transacción del pleito sostenido con dichos señores sobre propiedad de la citada residencia árabe y de la casa mencionada, el deseo de los donantes respecto a este inmueble se vería satisfecho con que se estableciera en el mismo un edificio cultural, como Biblioteca o Museo de Arte español, aplicación que armoniza perfectamente con el carácter de la construcción y con su histórico abolengo*, por lo que la Comisaría Regia del Turismo solicitaría a cesión del inmueble, *con el fin de instalar en ella una Residencia americana análoga a la establecida en otra provincia para organizar en Granada una Biblioteca de arte y viajes y un Museo de estampas y dibujos referentes a vistas, paisajes y costumbres andaluzas, proyecto altamente conveniente para aquella capital, que debe ser considerada como la primera de las poblaciones colombinas por los sucesos históricos que enlazan su rendición en 1492, bajo el poder de los Reyes Católicos, con el descubrimiento de América; hechos todos que constituyen por su interés y por los Monumentos que dan vida al pasado un Centro de atracción y estudio para el turismo americano*. Con la promulgación de la **Real Orden de 1º de julio de 1929 sobre la Alhambra**, la antigua residencia de los reyes nazarí se convertía en un dominio público tutelado directamente por el Estado, trato preferente a cualquiera de los bienes inmuebles que hasta este momento habían sido declarado Monumento

Nacional. Como así aparecía reflejada en la Exposición de Motivos las antiguas controversias entre el Municipio y el propio Estado quedaban zanjadas, al establecer la primacía estatal sobre cualquier: *Hubo pues, y debido a esto, una confusión de atribuciones en lo que respecta a las licencias de obras entre el Ayuntamiento de Granada y la Dirección General de Bellas Artes. La importancia mundial de la Alhambra, el prestigio que para España representa su conservación en inmejorables condiciones, aconseja que para la concesión de dichas licencias tan solo se tenga en cuenta los intereses artísticos y arqueológicos del Monumento y no los variables y de índole muy distinta de una Corporación Municipal, aun prescindiendo de influencias y presiones locales, a veces de interés personal. Por ello, y teniendo en cuenta que el Estado costea todos los gastos de mantenimiento, tanto del Monumento como de sus paseos, bosques, caminos y alamedas, y que los únicos que contribuye el Ayuntamiento de Granada son los del alumbrado, y habida cuenta de lo dispuesto en el Real decreto antes citado, de 23 de abril de 1915, por lo que se dispondría en el artículo 1º que en el recinto de la Alhambra, comprendiendo por tal toda la superficie atendida por el Estado y encomendada a la Dirección la administración de ella (...) las licencias para obra nueva o de reforma deberán solicitarse de la Dirección General de Bellas Artes, la que con el asesoramiento de la Junta de Patronato de Conservación de Riqueza Artística y previo el informe del Arquitecto conservador, les concederá o denegará. En el primer caso pasarán al Ayuntamiento para el pago de los correspondientes derechos; en el último, no serán necesarios, ya que el acuerdo de la Dirección no podrá ser modificado o revocado por la Corporación Municipal.*

#### **5.5. Un nuevo modelo institucional en la tutela del Patrimonio Monumental Inmobiliario: Los arquitectos conservadores.**

A finales de esta etapa los problemas que conllevaban la conservación del Patrimonio Monumental Inmobiliario se quiso paliar con la promulgación de **la Real orden de 26 de julio de 1929** disponiendo que los proyectos y ejecución de obras en los Monumentos declarados patrimonio del Tesoro Artístico-Nacional estén a cargo de los Arquitectos con honorarios fijos. En la Exposición de Motivos se justificaba esta medida por la pésima gestión institucional que había llevado a cabo hasta este momento la Junta de Patronato: *Lecciones de la experiencia y muy particularmente las obtenidas por la Junta de Patronato para la protección y acrecentamiento de nuestro Tesoro Artístico Nacional, al aplicar los preceptos del Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, y de su Reglamento de 25 de junio de 1928, han demostrado la ineficacia del sistema hasta aquí seguido para el logro de la misión que al Patronato le está encomendada. Limitadas las facultades de los Arquitectos encargados de la conservación de nuestros monumentos a la redacción de proyectos, dirección y ejecución de obras en aquellos que particular y exclusivamente le están encomendados, tal limitación determina multiplicidad de encargos y Arquitectos, y como consecuencias inmediatas la falta de unidad de criterio en la restauración y de conocimiento exacto y de conjunto de la extensión y verdadero estado de nuestro Tesoro Artístico, conocimiento previo y necesario para su debida ordenación y proceder con mayores elementos de juicio, y, por lo tanto, con mayor acierto a la recta distribución de las consignaciones de nuestros presupuestos. Se incluía a los arquitectos en cuanto no se instituyera*

un nuevo organismo que pudiera sustituir el organigrama anterior: *A la creación, en cuanto sea posible, de un organismo especializado y atento, como primordial, si no único fin, al celoso cuidado de conservar y restaurar nuestra riqueza artística y monumental, con unidad de criterio y dirección, debe tenderse, y para lograrlo conviene nombrar Arquitectos con honorarios fijos, no adscritos a determinados monumentos, sino a la Junta de Patronato y dependiente de ella.* En la misma línea se encontraba el arquitecto Leopoldo Torres Balbas al criticar la actitud de algunos arquitectos en materia de restauración: *En todos los países que tienen un copioso pasado monumental existe un servicio perfectamente organizado que se ocupa exclusivamente de atender a su conservación. Hay arquitectos consagrados únicamente al cuidado y reparación de los monumentos, formados en cursos especiales o en la práctica constante, al lado de otros de más edad y experiencia. En España no. En España se cree que cualquier arquitecto por el hecho de serlo, está capacitado para intervenir en la conservación y restauración de monumentos. Cualquiera, sin conocimiento alguno de arqueología monumental, ignorando los métodos modernos que se emplean en la reparación de aquellos (...) La reparación de un edificio, frecuentemente de capital importancia, será para él un episodio secundario en su vida profesional. La consecuencia es que en que la mayoría de los casos se reparan los viejos edificios con el mismo criterio que se repararía una casa moderna en estado ruinoso(...)¿Hasta cuándo durará este régimen anárquico que nos va constando la pérdida de tantos monumentos de nuestro pasado? ¿Hasta cuándo seguiremos pensando que la conservación y restauración de los viejos monumentos es una ciencia infusa que alcanzamos con el título de arquitecto?*<sup>2906</sup>.

Con el fin de ganar eficacia se dividió el territorio nacional en seis zonas a cuyo frente se nombrarían arquitectos con la misión de conservar su patrimonio, al modo de los soprintendenti italianos o los franceses architectes en chef de monuments historiques, perdurando hasta 1980. Las seis zonas estarían articuladas en los siguientes territorios: 1º Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense, Palencia, Pontevedra, Santander y Zamora; 2º Alava, Burgos, Guipúzcoa, Huesca, Logroño, Navarra, Soria, Vizcaya y Zaragoza; 3 Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Lérida, Tarragona, Teruel y Valencia; 4º Avila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo y Valladolid; 5º Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Sevilla y Canarias y 6º Albacete, Alicante, Almería, Granada, Murcia, Jaén y Málaga. Su nombramiento y separación, así como la suspensión de las obras que realicen debía de hacerse de Real orden, a propuesta del Comité Ejecutivo Permanente de la Junta del Patronato para la defensa de la riqueza monumental, histórica y artística de España (art.1). Serían designados Alejandro Ferrant (1897-1976), Teodoro Ríos (1887-1969), Jerónimo Martorell (1876-1951), Emilio Moya (1894-1943), Pablo Gutiérrez (1876-1959) y Leopoldo Torres Balbás (1888-

<sup>2906</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo “La restauración del Claustro de San Juan de la Peña”, *Arquitectura*, Año VII, N.88, agosto de 1926, pp.307-308.



1960)<sup>2907</sup>. Como apunta Julián Esteban Chapapría *no cabe duda de que la elección de los seis arquitectos conservadores de las respectivas zonas en las que había sido dividido el territorio nacional debió de hacerse con sumo cuidado, puesto que se jugaba en ella el éxito de la empresa (...) por lo que configuraron un sólido grupo que supo entender la filosofía y la práctica de las tareas que se pretendían abordar, quebrando la dinámica de restauración de monumentos que se arrastraba desde el siglo anterior. Algunos de ellos ayudaron a definir la tan necesaria renovación desde el punto de vista conceptual, y todos hicieron un gran esfuerzo por ponerla en práctica (...) No se trató de un grupo de funcionarios, sino de técnicos de confianza contratados por nombramientos especiales por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a propuesta de la Junta Superior del Tesoro Nacional, que requerían de su ratificación periódica, y añade: Respecto de este singular colectivo, no puede hablarse de un grupo homogéneo de pensamiento o de acción, pero sí de la conciencia de su compromiso con la cultura y el patrimonio, así como de la voluntad de plasmar una nueva manera de abordar la conservación monumental, rigurosa, científica, validando documentalmente sus intervenciones (...) el trabajo de estos arquitectos fue de una extraordinaria intensidad en la búsqueda, identificación y conocimiento del patrimonio a su cargo (...)*<sup>2908</sup>.

Serían delimitadas las obligaciones del Arquitecto de cada zona que serían 1º) La redacción de los proyectos para la conservación, reparación, consolidación o restauración de los monumentos declarados del Tesoro Artístico Nacional que radiquen en su zona, y ejecutar los que fueren aprobados, sea o no autor de los mismos; 2º) Ejercer una función inspectora en los monumentos y obras que fueran realizados cuando su ejecución nos le estuviese encomendada; 3º) Auxiliar al Comité Ejecutivo Permanente en la clasificación de los monumentos, realizando los trabajos que aquel organismo les encomendare; 4º) Intervenir en los expedientes de adquisiciones, expropiaciones, ventas, etc., y en general, en cuantos asuntos y comisiones se les ordenare dentro de su propia zona, y excepcionalmente fuera de ella, en virtud de acuerdo del Comité Ejecutivo y por orden de su Presidente, como Director General de Bellas Artes; 5º Elevar a la Junta del Patronato en el mes de diciembre de cada año el plan de obras a realizar en el ejercicio económico sucesivo, ajustándose a las siguientes normas de prelación: a) Inminente ruina del monumento; b) Importancia artística o histórica y posible aprovechamiento del monumento; c) Su situación en lugares más o menos frecuentados por el turismo.; 6º Dar cuenta a la Junta del Patronato, por medio de una sucinta Memoria, de la determinación de las obras emprendidas en cada uno de los Monumentos de su zona, a los quince días de haber terminado aquella; 7º) Redactar una Memoria anual, que elevaría a la Superioridad en el mes de

---

<sup>2907</sup> ESTEBAN-CHAPAPRÍA, Julián Esteban “La conservación del Patrimonio Arquitectónico Español. Un balance y tres décadas cruciales (1929-1958)”.

<sup>2908</sup> ESTEBAN CHAPAPRÍA, Julián Emilio Moya Lledós, arquitecto conservador de Monumentos (1929-1936).

enero, dando cuenta de los trabajos realizado en el año anterior, estado actual de las obras en curso y en cuanto a su juicio estime conveniente para el mejor régimen del servicio. Se podía llegar al caso de excepcional de que algún Arquitecto no perteneciente a su respectiva zona que se le pudiera encomendar la restauración, conservación o consolidación de un Monumento determinado, que debía ser a través de una Real Orden, y a propuesta de la Junta del Patronato, siempre que pudiera ser justificado su competencia y especialización, acreditadas por trabajos o publicaciones anteriores, en relación con el monumento de que se trate (art.4º). Incluso se le podía encomendar como *misión especial y de carácter transitorio* el índice de los monumentos, ciudades, pueblos y lugares pintorescos, castillos, murallas, monasterios, ermitas, fuentes, casas, etc., y de sus ruinas, de cuya existencia en su respectiva demarcación tuvieran noticias, estén o no estén declarados del Tesoro Artístico Nacional, y que, a su juicio, merezcan la atención de la Junta, a los fines que se determinan en los artículos 17 y 20 del Decreto-ley de 9 de agosto de 1926 (art.5º). Los proyectos de obras que se les hubieren encargados al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sería remitidos por Los Arquitectos afectos a dichas zonas para informe del Comité Ejecutivo de la Junta del Patronato, y en caso de ser por éste admitidos pasarán al examen técnico de la Junta facultativa de Construcciones Civiles (art.6), exceptuando de este trámite la ejecución de las obras perentorias, en atención al ruinoso estado de los edificios, y para las que el Comité podrá conceder el auxilio inmediato que estime necesario, dentro del límite máximo de 10.000 pesetas (art.6), quedando de propiedad del Estado, los proyectos, con sus planos, formulados por los Arquitectos respectivos de cada zona, una vez aprobados y mandados ejecutar, quedarán de propiedad del Estado (art.7). La medida sería retroactiva por el que desde el día de la publicación del Decreto cesarían los Arquitectos que tuvieran a su cargo la conservación y la restauración de los Monumentos declarados del Tesoro Artístico Nacional, que no disfruten de sueldo por el presupuesto ordinario, exceptuando aquellos que tuvieran proyectos totales o parciales en curso de ejecución, y los que, sin ser autores de los proyectos, estuvieren encargados de la ejecución de las obras, de no acordarse su cese por Real Orden y a propuesta del Comité ejecutivo de la Junta de Patronato (art.9). Por su parte, los Arquitectos que en la fecha de publicación del Decreto tuviesen aprobado algún proyecto por la Junta de Patronato o pendientes de Informe de la Junta facultativa de Construcciones Civiles, siempre en caso de la ulterior aprobación por ésta, podrían ser encargados de la ejecución de las respectivas obras con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4º del presente Decreto (art.9).

Unos meses más tardes, sería promulgada la **Real Orden de 2 de noviembre de 1929** dictando disposiciones a los arquitectos de zona, con el fin de *unificar y organizar los servicios referentes a la conservación de nuestra riqueza monumental y artística*, con lo que facilitaría a la Dirección General de

Bellas Artes, *el conocimiento rápido y directo de la situación actual en que se hallan las construcciones ya tuteladas por el Estado*. Sin embargo aparecía una novedad digna de destacar, al referirse a aquellos bienes inmuebles que no estaban en este momento bajo el amparo tutelar del Estado: *Más para que se realice una labor completa encaminada a conservar nuestra riqueza monumental, es necesario, además de darle normas generales para el desempeño de su cometido, extenderlo a la inspección técnica de todos aquellos otros monumentos que no estando en la actualidad bajo el amparo del Estado, merezcan su protección y auxilio a juicios de estos técnicos especializados*. Sería delimitado minuciosamente las obligaciones a cumplir por estos arquitectos, como realizar visitas todos aquellos bienes que se hallasen enclavados en sus respectivas demarcaciones, en un plazo improrrogable plazo de tres meses, contando desde la publicación de esta Real orden en la Gaceta; tras lo cual y dentro del referido plazo debían enviar un informe detallado por cada uno de los Monumentos visitados, en el que han de hacer constar su emplazamiento, señalando bien los linderos que limiten la propiedad; su propietario, su actual poseedor y el estado detallado de su conservación a la Dirección General de Bellas Artes (2º). En caso de que el Monumento estuviera necesitado de urgentes reparaciones, los Arquitectos elaborarían un anteproyecto de presupuesto consignando aproximadamente la cantidad que juzguen necesaria para repararlo (3º). Unos meses después, con la promulgación del **Real Decreto-Ley de 1930**, se establecería dos Inspectores generales en sustitución de dos Inspectores de Obras, cuya denominación desaparecía, uno de Inspección General de Construcciones del Ministerio, siendo de su competencia obras nuevas y las de reparaciones que se declaren a cargo de Real Orden y el segundo, la Inspección del Tesoro Artístico y Arqueológico, que tendría a su cargo la Inspección de los Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos y de las obras de arte en ellos de mera conservación, consolidación y garantía, con el absoluto respeto debido a la pureza del testimonio histórico (art.4.1). Como condición preliminar para ser nombrado Inspector General de Construcciones Civiles debía ser arquitecto y miembro de la Junta de Construcciones Civiles, mientras que para el caso de Inspector General del Tesoro Artístico será condición precisa la de ser Catedrático o Profesor Numerario de Historia del Arte o de Arqueología en Universidad o Escuela Superior, o ser Arquitecto, singularmente especializado en las mismas disciplinas, habiendo desempeñado el cargo de Arquitectos-Arqueólogos o Conservadores de zonas regionales (art.4.2), aunque se añadiría que podía ser designado Inspector General del Tesoro Artístico, quien tuviera una idoneidad personal para el cargo universalmente reconocida (art.4.3). El nombramiento y separación del cargo de Inspector General de Construcciones Civil o del Tesoro Artístico sería en virtud de Real decreto (art.4.4), siendo redistribuido con 10.000 pesetas de sueldo o gratificación (art.4.5), por lo que se intentaba incluir un nuevo personal administrativo que lo alejaba de la identidad del erudito local que de manera gratuita. Asimismo quedarían adscritos los seis Arquitectos de zona a

la Junta del Tesoro Artístico Nacional, pero la inspección general de los Monumentos Nacionales, históricos, artísticos, estará atribuida al Inspector general del Tesoro Artístico. Los Arquitectos de Zona se llamarían en adelante Arquitectos Conservadores de Monumentos, dotándolos con 10.000 pesetas anuales, como honorarios fijos, a cargo del crédito global de conservación de la riqueza artística y monumental, con las dietas y gastos de viajes de los mismos y del Inspector general en su caso (art.5).

## **6. La configuración del tejido urbano como bien de interés histórico-artístico en base al Real Decreto-ley de 1926.**

### **6.1. La configuración del centro histórico como bien de interés histórico y artístico.**

La configuración jurídica del tejido urbano de interés histórico y artístico sería sin ser contemplada por algunos sectores de la sociedad, incluso por la propia Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en los primeros años del siglo XX. En el Informe redactado por el académico Antonio Garrido, el 25 de marzo de 1925 contestando a la instancia que la Sociedad los Amigos de Cuenca habían enviado a la Real Academia solicitando la declaración de Monumento Nacional para la ciudad, lo considera como un hecho prácticamente irrealizable: (...) *Las consideraciones expuestas privan a esta Academia, en mi modesto sentir, de poder aconsejar la declaración de Monumento Nacional para toda la parte antigua de esta ciudad, porque, sobre no ostentar ésta valor artístico ni arqueológico en el grado de rara excepción y mérito máximo que pudiera dar lugar a proponerla, entiendo que la declaración global, así en conjunto, cuya fórmula fue propuesta y adoptada en el V Congreso Internacional del Turismo, no pasa de ser una bella utopía, un noble propósito tan halagüeño como irrealizable, una romántica y adorable aspiración en pugna con la realidad prosaica de la vida ciudadana, reñida con las naturables e ineludibles necesidades de la existente actividad, contraria, en suma, a las consecuentes exigencias del constante progreso e inevitable crecimiento de las poblaciones. La ciudad-museo, la ciudad del espíritu no sería habitable. El excelso sentimiento de admiración, el éxtasis ante la Historia, ante el Arte, ante el Ideal, exige aislamiento (...), imposible de obtener, ni de intentar siquiera, en el incendio de vida de nuestros pueblos modernos.* En su defecto, el académico propondría que a cada uno de los bienes inmuebles dignos de ser tutelado por su interés histórico y artístico se le aplicase la ley de 7 de julio de 1911: *La Academia, no obstante, no puede mostrar indiferencia ni declarase inhíbita ante el doloroso espectáculo que ofrece la ciudad al ser desposeída, de aquellos valores tradicionales que, con laudable entusiasmo, defienden los Amigos de Cuenca, y que este ponente opina encontrarían segura salvaguardia, librándose del probable riesgo o peligro que les amenaza, aplicando, aisladamente, a cada edificio que por su reconocido mérito o singulares condiciones sean digno de ello, y previo el reglamentario expediente para cada caso, aquella parte pertinente de la ley de 7 de julio de 1911, relativa a la conservación de ruinas y antigüedades*<sup>2909</sup>. Este hecho nos

<sup>2909</sup> GARRIDO, Antonio "Informe relativo a instancia de Los Amigos de Cuenca solicitando la declaración de Monumento Nacional para dicha ciudad, o en su defecto la aplicación de los

lleva a pensar que todavía no existía en la conciencia pública la necesidad de salvaguardar el conjunto de identidad patrimonial que se podía proyectar en el tejido urbano histórico, por lo que seguía persistiendo la idea de tutela individual de los bienes inmuebles del Patrimonio Monumental.

El arquitecto Luis Bellido publicaría en la revista *El Arte Español* un interesante artículo titulado “Arquitectura y urbanismo ya en los años 1928 y 1929”, que recogía unos extractos de la conferencia que impartió en el Museo Municipal en la Exposición de proyectos de Información de la Ciudad sobre Conservación de los Monumentos y Zonas, y aun ciudades enteras, de carácter artístico, defendiendo la intervención estatal en la tutela del tejido urbano de interés histórico y artístico, con la limitación del derecho de la propiedad privada, y la proliferación de disposiciones legales que en estos años estaban produciendo en Europa: *En todos los Congresos de arquitectos viene hace años figurando este tema, lo que prueba el interés que despierta. En muchos países existen leyes de protección y reglamentos limitativos de la propiedad, que permiten defender los monumentos. La ley prusiana de 15 de julio de 1907 sobre protección de los sitios notables, ha permitido a muchas ciudades la conservación de su carácter peculiar. Entre las más notables se cuentan Hannover, Ratisbona y Nuremberg. La Ley Italiana de 12 de junio de 1902 prevé, no sólo la forma de conservar los monumentos, sino las limitaciones que pueden ponerse a los edificios vecinos, para evitar que por consecuencia de sus alteraciones, se quite vista o luz, o buenas perspectivas, a aquellos monumentos. En Roma se interviene en algunas zonas hasta el color de las fachadas, de las ventanas y rejas. En París existen ciertas servidumbres de altura de edificios que datan de Enrique IV; y se han conservados bajo todos los regímenes. Hay, además, ciertos números de sitios protegidos por disposiciones especiales: Place des Victoires (1685); Place de Vendome (1699); Rue Royale, Place de la Concorde et abords (1757); Place du Pantheon (1807); de la Madeleine (1808) en total llegan a 30. Merced a estas sabias limitaciones se ha logrado conservar a París su sello monumental inconfundible. Para el caso de España se muestra En España hay diversas disposiciones, algunas muy recientes, para protección del Tesoro Artístico: pero no ocurre lo mismo con la conservación del carácter de las poblaciones o barrios históricos o monumentales. Se ha intentado hasta la declaración de monumento nacional de todo Toledo. Esto ofrece, sin duda, serias dificultades de orden práctico y legal; pero algo hay que hacer, no solo por lo que respecta a los monumentos antiguos y al carácter de los barrios citados, sino cuando se refiere al aspecto estético de las poblaciones, que hoy las Ordenanzas, códigos locales, no pueden garantizar. Sin duda es materia delicada, y muy expuesta a que en nombre del interés público se cometan arbitrariedades; pero no es ello razón para no intentarlo. Se ha hablado varias veces de instituir en Madrid una Comisión de Arte Público; y yo creo que algo así podría resolver el problema. Una comisión integrada por personalidades bien destacadas de las artes, elegidas por sus cargos, por ejemplo, de directores de Museos, Académicos, en unión de representación técnica del*

---

preceptos de la ley de 7 de julio de 1911 a la parte vieja y antiguas iglesias que cita” *Boletín de la Real Academia de San Fernando*, Segunda Epoca, Madrid, Núm.73, 31 de marzo de 1925, pp.44-45.



*Ayuntamiento y presidida por la suprema autoridad municipal, podría examinar cuantos casos se le sometieran, o surgieran de su iniciativa*<sup>2910</sup>.

## **6.2. La inclusión en el ámbito legislativo de la protección del tejido urbano de interés histórico y artístico.**

Algunos de estos planteamientos urbanísticos posteriormente se irían haciendo realidad con la promulgación del Estatuto Municipal de 1924 y la Ley de 1926 con respecto a la conservación de los centros históricos.

### **6.2.1. El deber de conservación de los Monumentos por las Corporaciones Municipales: El Estatuto Municipal de 1924 y su proyección en la conservación del patrimonio histórico-artístico.**

Unos días después de la instauración del Directorio, en septiembre de 1924, comenzaría la andadura de la elaboración del Estatuto Municipal, uno de los pilares de la organización administrativa del nuevo Régimen. El personaje clave de su redacción sería José Calvo Sotelo, al ser nombrado Director General de Administración, que después unos pocos meses de deliberaciones sería sancionado por el Monarca, concretamente el 8 de marzo de 1924. El Estatuto constaría de 585 artículos, más una disposición adicional y 28 transitorias, distribuidos en dos libros, el primero referido a la organización y administración municipal y el segundo a la Hacienda Local<sup>2911</sup>. El Municipio se convertía en una entidad natural, con plena capacidad jurídica, atribuyendo a los ayuntamientos una gran número de competencias, especialmente en el ámbito del urbanismo, y concretamente en la tutela del Patrimonio Monumental<sup>2912</sup>. No hay duda de que con la promulgación del Estatuto Municipal de 1924, las Corporaciones Municipales adquirieron un nuevo perfil político y jurídico que tuvieron una amplia proyección en el ámbito urbanístico, en unos años donde el debate conservacionista había alcanzado un punto álgido entre eruditos y arquitectos vanguardistas. Como afirma Martín Bassols, *en el orden urbanístico, su significación es análogamente considerable; bastaría para atribuirle este calificativo el haber configurado las diversas actuaciones urbanísticas hasta aquel momento vigentes en cometidos propios y comunes de la competencia municipal frente al carácter singular y excepcional que les otorgaba la legislación especial que las alumbró. A las operaciones de ensanche, saneamiento y reforma interior, actividades excepcionales, el Estatuto les confirió el rasgo de cometidos ordinarios del municipio, articulando paralelamente un régimen jurídico para su más eficaz realización. Sin perjuicio de este valor intrínseco (...) que el Estado Municipal carece de auténtica originalidad en materia urbanística*

<sup>2910</sup> BELLIDO, Luis, "Arquitectura y urbanismo" *Arte Español*, Tomo IX, 1928-1929. pp.512-513.

<sup>2911</sup> COSCULLUELA MONTANER, Luis *Legislación sobre Administración local, 1900-1975* Tomo II, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1981, pp. XI-XV.

<sup>2912</sup> GONZÁLEZ BERENGER, J.L. "El Estatuto Municipal y el urbanismo de su época", en *Estudios Conmemorativos del Cincuentenario del Estatuto Municipal*, Madrid, IEAL, 1974, pp.479-485.

(...), *no abordando frontalmente ningún tema que la doctrina urbanística de la época había decantado ya como de urgente realización o cuanto menos de ensayo. En resumen, se trata de una brillantísima síntesis, refundición y reordenación de preceptos anteriores, pero carente de toda originalidad (...)* Con todo, debe admitirse que se trata de una valiosa recopilación –hasta aquel momento no alcanzada–, de los preceptos urbanísticos anteriormente dispersos en textos legales dictados en distintas épocas y de diversos rango normativo (...) <sup>2913</sup>.

El Estatuto Municipal proclamaba el principio de que las actuaciones en el orden urbanístico constituyen una competencia exclusiva de los Ayuntamientos, quedando sus atribuciones reguladas entre los artículos 150 y 180. En el mismo Preámbulo ya se establecía el principio de autonomía municipal en el ámbito de los planeamientos urbanísticos: *Los ayuntamientos podrán y deberán abordar sus obras de ensanche, urbanización y saneamiento sin necesidad de someter los planes respectivos al informe sucesivo de Corporaciones, Academias y Centros en peregrinación interminables de años y años; el acuerdo municipal, que por sí solo ahorra dos períodos de la expropiación forzosa, según los casos (...)*. En una lectura superficial, solamente la Comisión Sanitaria Central y Provincial tendría una tutela sobre las decisiones urbanísticas de las Corporaciones Municipales, aunque aparentemente mínima. Sin embargo, como afirma Martín Bassols: (...) *El Reglamento de Obras y Servicios, otorgaba una dilatada amplitud a los cometidos técnicos-sanitarios, hasta hacerlos sinónimos prácticamente de toda la materia urbanística, con lo cual el ámbito de fiscalización estatal experimentaba un incremento mucho más extenso que con el configurado inicialmente por el Estatuto* <sup>2914</sup>. Curiosamente, entre los componentes de la Comisión se encontraría un representante de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, por lo que el control de la protección del patrimonio se había trasladado a la Comisión Sanitaria. En el artículo 150.8, se establecía como competencia municipal la conservación de monumentos artísticos e históricos. Es en el capítulo VI del Reglamento cuyo título *De los servicios de ornato y embellecimiento de las Poblaciones*, donde se insertarían algunas normas de protección histórico-artístico. Entre las obligaciones que tenía que cumplir los ayuntamientos se encontraría la de velar la conservación de los monumentos, como así prescribe el artículo 101: *Es obligación de los Ayuntamientos velar por la conservación de los Monumentos artísticos e históricos, bien sean de la propiedad de los Municipios o de la de otras Corporaciones o particulares*.

En todas las vías que por su anchura lo permitan, se procurará la plantación de árboles, de especies adecuadas para que no establezcan contacto con los edificios, ni oculten la fachada que tengan carácter monumental. Se daba capacidad a los Ayuntamientos para poder expropiar a aquellos Monumentos artísticos e históricos que sus propietarios desearan derribar,

---

<sup>2913</sup> BASSOLS, Martín, 1973, pp. 493-494.

<sup>2914</sup> BASSOLS, Martín, 1973, p.498.

abonando tan solo el valor del terreno y el de las edificaciones, sin sobreprecio alguno por la condición de artístico o histórico (art.103). En el artículo 104 se propondría que *los proyectos de ensanche, extensión o reforma interior de poblaciones que afecten a edificios artísticos o históricos, hayan o no sido declarados monumentos nacionales, deberán respetarlos en sus trazados, salvo caso de imposibilidad manifiesta*. Como se puede observar, cualquier proyecto urbanístico (sea ensanche, extensión o reforma interior), tenía que venir unido de una protección de cualquier monumento, hubiera o no sido declarado, aunque incluía al mismo tiempo la excepcionalidad de *la imposibilidad manifiesta*, difícil de definir, pero en cualquier caso, como apunta Fariña, siempre el representante de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en la Comisión Sanitaria correspondiente podría demostrar la posibilidad de respetar su trazado. De igual manera siguiendo a Fariña, se puede perfilar como novedad la obligación del plan de respetar los edificios históricos o artísticos, independientemente de que éstos hubieran sido declarados monumentos, por lo que ya observa como el concepto de *Patrimonio que propone el Reglamento es de tipo material y no formal tal como se aparecerá tradicionalmente en la legislación posterior*<sup>2915</sup>.

Al mismo a raíz del **Real decreto de 10 de abril de 1924** sería suprimida la Junta de Urbanización y Obras que había sido creada por el Ministerio de Gobernación por Real decreto de 14 de julio de 1903. La causa de la suspensión de dicha institución administrativa estaría fundamentada en el nuevo papel que en el Estatuto Municipal se le otorgaba a los Municipios en el ámbito de la urbanización. En la propia Exposición de Motivos se precisaba la inoperancia del suprimido órgano administrativo: *Las disposiciones administrativas que el Estatuto Municipal deroga aconsejaron la creación en el Ministerio de la Gobernación de una Junta consultiva, denominada de Urbanización y Obras, para que le informase en todos aquellos asuntos que, relacionados con tal materia, hubiesen de ser objeto de sus resoluciones, garantizando así el mejor acierto de éstas. La expresada Junta, que fue creada en 16 de junio de 1894, suprimida en 7 de octubre de 1901 y restablecida en 14 de julio de 1903, llenó docta y cumplidamente, como es notorio, los fines para que fue creada; pero vigente desde 1º de abril actual el Real decreto-ley de 8 de marzo último, estableciendo el Estatuto Municipal, por virtud de cuyos preceptos es de exclusiva competencia de los Ayuntamientos proyectar, construir y aprobar todas las obras de ensanche, saneamiento y urbanización de los respectivos términos municipales, ninguna consideración aconseja la existencia de la citada Junta, puesto que como consecuencia de la aludida facultad concedida a los Ayuntamientos, es indudable que tal organismo ha de carecer en la actualidad de asuntos en que entender*. Con la publicación del **Real decreto de 20 de marzo de 1925** sería aprobado el Estatuto Provincial, por el que se le atribuiría a las Diputaciones *regir*,

<sup>2915</sup> FARÍÑA TOJO, José *La protección del Patrimonio Urbano. Instrumentos Normativos*. Madrid, 2000, p.39. Akal Arquitectura

*administrar y fomentar los intereses particulares de la provincia, siendo de su competencia, por consiguiente, la creación, conservación y mejora de los servicios e institutos que tengan por objeto el estímulo o satisfacción de sus intereses morales y materiales, y en especial, la conservación de Monumentos artísticos e históricos (art.107.k).*

Como había ocurrido en la etapa anterior, a pesar de la promulgación del Estatuto de 1924, el deber de conservación por parte de las Corporaciones Municipales no siempre se cumplió, incluso movido por intereses particulares llevaría al derribo de un amplio número de inmuebles, consiguiendo incluso la autorización del Ministerio de Instrucción Pública del derribo de un bien inmueble declarado Monumento Arquitectónico-Artístico para la construcción sobre su solar de un mercado. Un caso emblemático podía ser la autorización que consiguió el Ayuntamiento de Canet de Mar, provincia de Barcelona por la Real Orden de 1º de mayo de 1925, para demoler la torre de Can Maciá, propiedad de dicho Municipio y declarada Monumento arquitectónico-artístico por Real Orden de 11 de enero de 1921, a la vez que la torre de Mar, de dicha villa, amparándose en los derechos que concede el artículo 2º de la Ley de 4 de marzo de 1915 y fundamentando esta petición en la necesidad de hacer un “Mercado” en la Plaza y realizar mejoras de carácter urbano. En el Informe que emitiría la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, manifestaría: 1º) *Que dado los antecedentes estudiados aparece que en 1912 se inició por el Ayuntamiento de Canet de Mar el propósito de dotar a la Villa de un mercado público, adquiriéndose para ello en 1915 las fincas que estorbaban al proyecto, entre ellas una llamada de Can Maciá, que comprendía una casa vivienda y una torre unida a ella por un puente, siendo su compra en dos plazos y para responder la casa y torre, hasta el completo pago que se verificó en septiembre de 1919, habiendo sido demolida entonces la casa y el puente de comunicación con la torre, y cuando iba a ser derribada ésta, fue declarada Monumento arquitectónico-artístico, a la vez que otra denominada Torre del Mar, situada en otro punto de la villa, lo que imposibilitó la mejora urbana de que antes se hace mención.* 2º) *Que hay razón para una clara diferencia entre ambas torres, una y otra de vigilancia, refugio y defensa contra los piratas argelinos; pero que mientras la de la Mar, es de forma original y única en la comarca, con el antecedente histórico de haberse reunido en ella el primer Consejo Municipal de la villa, en tanto que la de Can Maciá, más vulgar, sólo ofreció interés cuando unida a la casa por el puente, constituía un ejemplar expresivo del objeto y funcionamiento de la fortificación, interés que ha desaparecido con la demolición citada, quedando hoy reducida a una fortaleza vulgar y muy repetida en aquella costa, de cuya desaparición no debe tenerse merma ni daño para la riqueza artística nacional, impidiendo, en cambio, su inútil conservación, la realización de una mejora urbana pedida por todo el vecindario, por lo que* 3º) *Que por estas razones no ve inconveniente en que, con aplicación del artículo 2º de la Ley de 4 de marzo de 1915, y subsistiendo los beneficios que la legislación vigente concede a la Torre del Mar, como Monumento Arquitectónico-Artístico, sea autorizado el Ayuntamiento de Canet de Mar para efectuar la demolición de la torre de Can Maciá.* De esta manera, de acuerdo con lo informado por la propia Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando, y envistas de las razones alegadas por el Ayuntamiento de Canet de Mar, para la demolición pretendida de la torre citada de Can Maciá, apoyada por la opinión de sus entidades y vecinos, que se trata de una mejora innegable de saneamiento y urbanización legítima de dicha población, a la cual se opone la conservación de dicha torre, se había tenido a bien resolver que se autorice el derribo de la torre de Can Maciá, objeto de este expediente, conforme solicita su Ayuntamiento, continuando en vigor la Real Orden de 11 de enero de 1921, por el que se declaró Monumento arquitectónico-artístico a la vez la Torre del Mar, de dicha villa, para la cual queda subsistente la referida declaración. Como podemos comprobar en la lectura del decreto se seguiría instando a la primacía del valor de modernidad e higiene frente a los supuestos valores de monumentalidad que podía tener el inmueble en cuestión.

En la misma línea podríamos citar la Real orden por el que se autoriza el derribo de la iglesia de San Gil, de Guadalajara, declarado Monumento arquitectónico-artístico, por estado de ruina, *donde en el Informe de la Real Academia de Bellas Artes de 9 de junio de 1928 consta como en 4 de marzo de 1905 el Ayuntamiento de Puente deume adquirió en la cantidad de 52.870 pesetas la propiedad del edificio con el único fin demolerlo y en su lugar hacer otras edificaciones. Pasaron muchos años sin que, al parecer, se tratase de derribo; por el contrario, se alojaron en el palacio una escuela y un casino. En enero de 1924, el Ayuntamiento volvió a su primitiva idea, pero hubo de tropezar con el obstáculo de que el Palacio había sido declarado por Real Orden Monumento arquitectónico-artístico (...) el 12 de febrero del mismo año, dos arquitectos informaron sobre su estado de ruina. Desalojados el casino y la escuela, en 19 de septiembre de 1925 se dirige el Alcalde a la Dirección General de Bellas Artes con la petición que encabeza este informe (...) Puesto el problema en estos términos, la solución pudiera encontrarse en autorizar el derribo de cuanto carece de valor arqueológico y artístico, dejando en pie el patio (...) Considerando tales restos como núcleo central de un parque y convertido en jardín el patio, salvaríase todo lo monumental del Palacio y se dotaría a Puente deume de un hermoso y singular paraje de esparcimiento para los naturales y de atracción para los viajeros*<sup>2916</sup>.

Sin embargo, no podemos obviar la actuación aunque en menor medida de las propias Corporaciones Municipales y Provinciales a la hora de conservar algunos bienes inmuebles de interés histórico y artístico, como en los casos de cambios de proyecto de urbanización en virtud de la defensa de un inmueble declarado Monumento Arquitectónico-Artístico, por lo que se promulgó el **Real decreto de 7 de noviembre de 1923** aprobando el proyecto de modificación de las alienaciones de la calle Alta de San Pedro de la reforma

<sup>2916</sup> SANCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, “Informe acerca del expediente incoado por el Ayuntamiento de Puente deume solicitando autorización para derribar el palacio-fortaleza de los Condes, declarado Monumento arquitectónico-artístico” en *Boletín de la Real Academia de San Fernando*, Segunda Epoca, Madrid, 31 de marzo de 1928, Año XXII, Núm.85, pp.78-81.



interior de Barcelona, al haberse declarado monumento arquitectónico-artístico un edificio perteneciente al Colegio de Arte Mayor de la Seda, antes Casa del Gremi dels Valers, situado en la Sección 3ª de la Gran Vía Layetana, de la reforma interior de Barcelona, por lo que la Comisión Municipal de reforma *acordó modificar las alineaciones afectadas por el indicado edificio, a fin de armonizar las necesidades del tránsito por la calle Alta de San Pedro con el estado de cosas creado por la referida resolución, formulando al efecto el oportuno proyecto, que una vez aprobado por el Ayuntamiento fue remitido al Gobernador de la provincia a los fines de la publicación ordenada en el art.82 del Reglamento de 13 de junio de 1879, cuyo trámite fue cumplido sin que se presentasen reclamaciones durante el plazo concedido al efecto, elevándose después el expediente y proyecto a este Ministerio en solicitud de la declaración de utilidad pública de la obra*, por lo que se manifestaría que *la modificación de alienaciones de que se trata es una necesidad ineludible, desde el momento en que el edificio perteneciente al Colegio del Arte Mayor de la Seda fue declarado monumento arquitectónico artístico, toda vez que con las alineaciones oficiales aprobadas dicho edificio tenía que ser expropiado y demolido, estando limitado la reforma proyectada a la impuesto por la obligatoria necesidad de conservarle*. En otras ocasiones las Diputaciones Provinciales y las Corporaciones Municipales se incorporaban a las Comisiones de conservación de Monumentos como fue el caso de la Comisión integradas por representaciones de los Ministerios de Guerra e Instrucción Pública y de la Diputación Provincial y Ayuntamiento de Lérida para conservar la Catedral Vieja de Lérida a raíz de la promulgación del Real decreto de 2 de noviembre de 1926, que había sido convertida en cuartel de Infantería.

Al igual que había ocurrido en la etapa anterior, se intentó limitar las licencias urbanas dada a particulares por las Corporaciones Municipales con el objeto de poner salvaguardar algún bien inmueble de valor histórico y artístico. Uno de los casos más paradigmáticos de este periodo a fin de valorizar algunos lienzos de murallas de algunas ciudades, fue la *prohibición de edificar sobre la misma, por Real Orden del 19 de abril de 1924*, disponiéndose que por el conducto oficial que procediera, sería llamado la atención a aquel ayuntamiento y de su alcalde presidente. En un Oficio de traslado de 24 de abril de 1924 del Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes al de Gobernación se comunicaba el informe de los académicos de la Historia y Bellas Artes de San Fernando sobre la construcción particular que afectaba a la Torre de los Abades de la ciudad de Toledo, así como otros casos similares, llamando la atención del Alcalde y Ayuntamiento de la localidad. En dicho oficio se notificaba como la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos de Toledo había comunicado que el Ayuntamiento de aquella ciudad había ido concediendo parcelas de terreno para edificar viviendas y garajes y que entre esas concesiones lo había hecho al pie de la Muralla, que son Monumento Nacional, y las inmediaciones del Circo Romano que lo es Arquitectónico-Artístico, y del castillo de San Servando, también Monumento Nacional. Agregaba la Comisión que las edificaciones levantadas

por virtud de tales concesiones perjudicaban a la visualidad de tan venerables monumentos, por lo que era conveniente que fueran prohibidas y que, a ser posible, fuesen destruidas las concesiones ya hechas en esas condiciones puesto que el Ayuntamiento se reservaba el derecho de mandarlas destruir cuando convenga. Al mismo tiempo se informaba que los particulares habían realizado socavones y otras obras que habían dejado en mal estado el inmueble, por lo que la Real Academia de la Historia solicitaba que *erade toda necesidad la reposición de aquellos cimientos y terraplenes a su primitivo estado y el derribo y desaparición de las tres tapias que se van a terminar en los terraplenes en que se apoyan las Murallas, para que desaparezca todo peligro y pueda libremente circularse bajo ellas, facilitando su contemplación y estudio, por lo que se consideraría quedada la frecuencia con que vienen autorizándose por el Ayuntamiento de Toledo estos edificios al pie del recinto murado, sería muy oportuno que se encareciera a dicha Corporación Municipal la conveniencia de limitar aquellas concesiones y que, en caso de autorizarlas, se prohibirá terminantemente apoyar muros modernos sobre o bajo las murallas e impedir la circulación al pie de ellas y su artística visualidad.*

#### **6.2.2. La inclusión del Tejido urbano de interés de interés histórico y artístico en el Decreto-Ley de 1926.**

Sin duda alguna la gran aportación de la Ley de 1926 fue la inclusión como bien jurídico del casco antiguo de las ciudades, que se adelantaba en cierta manera al espíritu de la Carta de Atenas de 1931 y de la Ley republicana de 1933. Las teorías de Giovanni Giovannoni fueron recogidas en la nueva normativa, aunque con matices. En el artículo 20 se reconocía claramente el reconocimiento de un nuevo bien jurídico: las ciudades o pueblos artísticos que formarían parte del Tesoro Nacional. Se iba reconociendo de esta forma una cierta preeminencia en algunas urbes del valor monumental sobre los aparentes valores de modernidad urbanística, aunque no cabe duda que los intereses turísticos eran los que en definitiva estaban comenzando a florecer, en orden a una defensa de una identidad urbana llena de historicismos, más que de interés histórico, que se convertía en atracción de numerosos visitantes extranjeros, en unos años donde el turismo estaba ganando adeptos. Otra novedad sería la propia participación institucional a la hora de proceder a la declaración como Tesoro Artístico. Los dos organismos que tendrían potestad para la declaración de Tesoro Nacional serían el Gobierno y el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en virtud de las solicitudes realizadas por las corporaciones municipales, bajo el visto bueno de las Reales Academias de Bellas Artes y de San Fernando: *El Gobierno, a petición de las ciudades y pueblos, por acuerdo tomado en sesiones de pleno del Cabildo Municipal, a instancias de las Comisiones de Monumentos o de la Comisaría Regia de Turismo, en petición dirigida al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, o a solicitud de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando, podrá acordar la declaración de ciudades y pueblos artísticos que entrarán a formar parte del Tesoro nacional. El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes podrá también adoptar por si mismo estos*

*acuerdos. Las solicitudes hechas por las ciudades y pueblos en virtud de acuerdo municipal, así como las elevadas al Ministerio de Instrucción Pública por la Comisión de Monumentos, deberán ser informadas por las Reales Academias de la Historia y de San Fernando y remitidas a la Junta de Patronato, que las elevará al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para la resolución que proceda.*

Al mismo tiempo se establecía los esbozos de planes urbanísticos, verdaderos precedentes de los Planes de Ordenación Urbanística, por el que se proponía unas medidas técnicas que incluso para algunos urbanistas actuales como Juan López Jaén, superaban las expectativas de la época, ya que ni siquiera en estos momentos se han podido alcanzar<sup>2917</sup>. Así en el artículo 21 se precisaba que los Ayuntamientos levantasen planos topográficos a una escala no inferior a 1:5000: *De las ciudades y pueblos total o parcialmente declarados o que se declaren incluidos en el Tesoro Artístico Nacional, se levantarán por los respectivos ayuntamientos planos topográficos a una escala no inferior a 1:5.000, y en ellos se acotarán, por medio de círculos, las superficies sujetas a servidumbres de no edificar libremente, marcándose con distintas tintas los edificios artísticos o históricos, lugares, calles, plazas y barriadas pintorescas, en las cuales no podrán hacerse obra alguna sin la autorización de las entidades central y provinciales correspondientes. De estas superficies se levantarán planos con una escala no menor de 1:200.000.* Sin embargo, José Castillo analiza el procedimiento empleado para la delimitación de espacios a proteger, matizando como todavía se ha utilizado un criterio más en principios teóricos de la restauración que en las técnicas urbanísticas de intervención. De esta manera, *los elementos que se diferencian (monumentos, calles, plazas y barriadas) responden a un concepto de ciudad histórica articulada por el pensamiento romántico en torno a categorías estéticas como el pintoresquismo y a principios ideológicos como la recuperación de las formas de la vida tradicional y el compromiso social que hay implícitos en ellos. La ciudad se configura, de este modo, más como una unidad formal (de base esteticista) que funcional (...)*<sup>2918</sup>. Los pueblos y ciudades que fueran declarados Tesoro Artístico Nacional deberían llevar a sus Ordenanzas municipales preceptos obligatorios y especiales de conservación de sus monumentos típicos y en las edificaciones modernas de los elementos y detalles propios y distintos de la antigüedad dignas de ser conservadas por su originalidad y carácter (art.22). Incluso en aquellas ciudades y pueblos que hubieran sido declarados incluidos en el Tesoro Artístico Nacional deberían formar parte de su Comisión de Ensanche dos individuos de la Comisión de Monumentos de la provincia como Vocales natos de la misma (art.23).

Ya en 1912 el alcalde Salvador Muñoz Pérez constituyó una Junta Municipal para defender la identidad tradicional de la ciudad, consiguiendo la restauración de dos puertas, la del Puente y la de Almodovar, y la disposición de una normativa que prohibiese reformar los inmuebles de interés histórico y

---

<sup>2917</sup> LOPEZ JAEN, Juan *Sobre los conjuntos históricos españoles* Ciudad y Territorio, 85, 1990, p.328.

<sup>2918</sup> CASTILLO, José, 1997, p.130.

artístico en la zona urbana histórica. No sería hasta la promulgación de la Ley de 1926 cuando se delimitó que la parte antigua de la ciudad fuera insertada en el tesoro artístico nacional, a raíz de la promulgación de la Real Orden de 26 de julio de 1929, que se convertiría en pionera de la protección de los cascos históricos<sup>2919</sup>. El procedimiento administrativo a seguir sería el siguiente: 1º) A instancia del propio Ayuntamiento se elevaría una instancia dirigida al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el que se instaba a incluir la parte vieja de la ciudad en el Tesoro Artístico Nacional la parte vieja de la ciudad, para lo que remitiría el Director General de Bellas Artes, Elías Tormo; 2º) La Comisión de Monumentos de Córdoba, por su parte, hizo a su vez igual petición, adjuntando como ilustración gráfico un plano de la ciudad, señalando con tinta roja la zona de referencia, petición que también formuló el Delegado Regio de Bellas Artes de la mencionada ciudad; 3º) Se pasaría tal petición a las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, que emitieron a su vez un informe favorable a la petición y la conformidad de su voto, a la que se uniría a la Junta de Conservación de la riqueza artística, propuso a su vez la inclusión solicitada por el citado Ayuntamiento, de acuerdo con lo informado por las Reales Academias. En su artículo 1º se establecía la delimitación a proteger: *Se declara, de acuerdo con el artículo 20 del R.D. Ley de 9 de agosto de 1926, incluido en el Tesoro Artístico Español, la parte vieja de la ciudad de Córdoba, cuya zona, señalada en el plano de la ciudad que obra en el expediente, comprende todo el distrito de la Derecha y de la Izquierda, las plazas de los Dolores, San Nicolás y de Santa Victoria, más el barrio de la mezquita, circunscrita para estos fines de zona artística por una línea que, partiendo del Portillo, siga por la calle Julio Romero, plaza de San Jerónimo Páez (...).la obligación que tiene de designar dos individuos de su seno para que como Vocales Natos, formen parte de la Comisión de Ensanche del Ayuntamiento de Córdoba.*<sup>2920</sup> Al mismo tiempo se manifestaba al Ayuntamiento de Córdoba las obligaciones que preceptuaban los artículos 21, 22 y 23 del Real Decreto Ley de 9 de agosto de 1926, desde el momento que se hacía la declaración (art.2º), obligación que asumirían las Corporaciones Municipales por imperativo de la ley. A la Comisión de Monumentos de Córdoba en cumplimiento del artículo 23 del citado Real Decreto se le preceptuaba la obligación de designar dos de sus miembros para que como Vocales natos formen parte de la Comisión de ensanche del Ayuntamiento de Córdoba (art.3).

A pesar de que la declaración de interés artístico de la ciudad de Córdoba se había convertido en un paso trascendental en la tutela pública, sería cuestionada tal medida por los intereses privados, especialmente propietarios particulares que lo subrayaban como obstáculo del desarrollo urbano y de su

<sup>2919</sup> La parte vieja de Córdoba es incluido en el tesoro artístico nacional, en *Diario de Córdoba*, 8 de agosto de 1929, p.3.

<sup>2920</sup> ROMERO DE TORRES, Enrique “Breve historia sobre la inclusión en el tesoro artístico nacional de la parte vieja de la ciudad de Córdoba y su aspecto urbano” *Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Córdoba y su provincia*, 1946, pp.3-10.

aparente modernidad. En 1929, M. Varo, Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana envió una instancia al alcalde señalando los perjuicios que podían causar a los propietarios privados la declaración de la ciudad como bien inscrito en el Tesoro Artístico. En dicho Informe se consideraba excesiva la delimitación de zonas de la ciudad con calles y edificios que no poseían ningún valor histórico o artístico y lo único que hacían era entorpecer el engrandecimiento urbano de la misma, pues se retenían todas las construcciones o modificaciones de edificios con el pretexto de estudiar su carácter y emplazamiento, lo que retrasaba considerablemente la actuación sobre ellas. Como vemos la normativa que garantizaba la protección del entorno monumental dañaban los intereses privados comenzando a desarrollarse una línea de contestación en la ciudad que persiste en la actualidad. Se llegaría a pedir al Ayuntamiento que solicitara al Ministerio de Instrucción Pública una reforma de la Real Orden de 26 de julio de 1929, con el objetivo de diseñar una nueva delimitación de la zona artística y arqueológica de la ciudad, que permitiera su desarrollo urbanístico y no fueran perjudicados sus intereses económicos. La respuesta del Ayuntamiento de Córdoba fue la de promover una conciliación para lo que se creó una ponencia técnica formada por los tenientes de alcaldes Angel Suárez Varela y Ramón León Priego, y miembros de la Comisión de Monumentos de Córdoba, que estudiara las posibles modificaciones de la Real Orden, aunque sería señalado en su Informe que esta disposición era de observancia obligatoria por el Ayuntamiento, por lo que prácticamente era imposible su alteración<sup>2921</sup>. De esta manera aunque de forma aparente se había superpuesto los valores monumentales a los principios de modernidad urbanística.

En algunos municipios, el deber de conservación del Patrimonio Monumental fue asimilado, gracias a la labor de algunos alcaldes como fue el caso de Angel Barrios en la ciudad de Granada, por la que sometería a la aprobación del Cabildo Municipal las siguientes medidas: 1º) Se suspendería toda licencia de obras tanto de derribo como de edificación en lugares de interés artístico, pintoresco y monumental en tanto no se comprobaran previamente los siguientes detalles: Que la obra a realizar no afectara sensiblemente a la belleza de la ciudad, bien por consistir en el derribo de una casa antigua y artística o en la edificación en una calle antigua y de carácter, de una casa de fachada moderna que destruya y afee el conjunto artístico de la calle. Que no se destruirán restos de edificación morisca, ni se desmontarán patios, artesonados, etc., en perjuicio de la riqueza artística de la ciudad; b) Esta suspensión se consideraría como medida provisional mientras el Municipio adopte el acuerdo de rogar a la Comisión de Monumentos que estudiare en el más breve plazo posible, los preceptos encaminados a

---

<sup>2921</sup> BELLIDO GANT, María Luisa “La inclusión de Córdoba en el Tesoro Artístico Nacional”, Historia del Arte y Bienes Culturales, Cuadernos, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1998, pp.97-98.



salvaguardar la defensa de los Monumentos artísticos, lugares pintorescos, calles antiguas y barrios típicos especialmente en lo que se refiere al Albayzín que por su enorme interés artístico y legendario debe ser objeto de un régimen especial; preceptos que incorporados a las ordenanzas municipales servirán en lo sucesivo como norma a la que deben ajustarse todas las construcciones y reformas urbanas<sup>2922</sup>. Leopoldo Torres Balbas siguiendo las tesis que había desarrollado en etapas anteriores Angel Ganivet defendería la identidad histórica de Granada, criticando la pérdida del tejido urbano: *Una antigua ciudad como Granada tiene sus grandes monumentos, que le dan fama, ostentando su arte a la admiración general; pero además, tiene una serie de barrios, de callejuelas, de plazoletas, de viviendas modestas, que son la expresión del arte popular. Y este arte humilde y callado, que pocos aprecian; este arte, que va transmitiéndose de generación en generación soterradamente, cuyas transformaciones son muy lentas, forma la verdadera personalidad espiritual de la urbe*<sup>2923</sup>. Finalmente sería promulgada la **Real orden de 5 de diciembre de 1929** declarando ciudad artística a Granada, y disponiendo entre a formar parte del Tesoro Artístico Nacional, que como constaba en la *Exposición de Motivos tal solicitud había respondido a los acuerdos de la Comisión permanente y del Pleno de la expresada Corporación, en uso de facultades autónomas y de las cuales se han unido al expediente los correspondientes certificados*, especificando que las Academias oficiales y demás centros a quienes correspondas podían emitir su informe acerca de si debe ser toda la ciudad de Granada o solo parte de ella la incluida en la mencionada declaración.

### **6.2.3. Una proyección del ordenamiento del patrimonio monumental en la tutela pública del patrimonio natural: la configuración de la categoría jurídica de sitios de interés nacional y de monumentos naturales de interés nacional.**

Al mismo tiempo que se configura la categoría jurídica de Tesoro para englobar los distintos bienes que configuraban el Patrimonio Monumental, surge una nueva conceptualización jurídica con el objeto de tutelar el Patrimonio Natural del Estado, bajo las denominaciones de Sitios de Interés Nacional y Monumentos Naturales de Interés Nacional, a raíz de la promulgación de la **Real Orden de 15 de julio de 1927**. En la Exposición de Motivos ya se establece los criterios que se fundamentan legislativamente a la hora de tutelarlos, como son *tanto la belleza pictórica y agreste del suelo patrio en general, como de aquellos lugares suyos predilectos que por sus condiciones especiales características logran tal apelativo*, apuntando al mismo tiempo los límites que se habían ido perfilando en la anterior legislación, concretamente el Real decreto de 23 de febrero de 1917, para la declaración de Parque o Sitio Nacional, al cursarse un amplio número de peticiones *de esta clase que no han*

<sup>2922</sup> La Alhambra, 568, Año XXVI, 31 de octubre de 1923, p.288.

<sup>2923</sup> TORRES BALBAS, Leopoldo “Granada: la ciudad que desaparece” *Arquitectura*, Año V, N.53, Madrid, septiembre de 1923, p.317.

*podido ser atendidas por no reunir las condiciones que el citado Real decreto señala, y que no deben, sin embargo, quedar desairadas por los nobles estímulos de patriotismo en que se inspiran, siendo, por lo tanto, conveniente que, manteniendo el criterio de rigor que dicha Soberana disposición establece, se procure medio legal de dar satisfacción a tales aspiraciones. Se dispondría por un lado el llamado Sitio de interés Nacional definidos como los parajes agrestes del territorio nacional, aún cuando su extensión sea reducida, que, sin reunir las condiciones necesarias para ser declarados Parques o Sitios Nacionales, merezcan, sin embargo, ser objeto, de especial distinción por su belleza del lugar, lo pintoresco del lugar, la exuberancia y particularidades de la vegetación espontánea, las formas especiales y singulares del roquedo, la hermosura de las formaciones hidrológicas o la magnificencia del panorama y del paisaje. Serían declaradas como Monumentos Naturales de Interés Nacional los elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco y de extraordinaria belleza o rareza, tales como peñones, piedras bamboleantes, árboles gigantes, cascadas, grutas, desfiladeros, etc. (art.1). Al carácter puramente natural se le uniría el hecho de que se insertara en los paisajes algún elemento de interés religioso, científico, artístico, histórico o legendario. El carácter honorífico de la Declaración oficial de Sitio o de Monumento Natural quedaba preceptuada en el artículo 2 para los Municipios en cuyo término existan estas bellezas naturales, así como para las Corporaciones Oficiales, entidades públicas o privadas y particulares a quien pertenezcan, con el exclusivo objeto y sin otro alcance que el de respetar y hacer que se respeten tales bellezas evitando su destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del hombre, y de favorecer en lo posible su acceso por vías de comunicación, perdiendo dicho carácter cuando, por causa intencionada o por desidia, desaparecieran o se aminoraran notablemente los fundamentos de tal distinción. Tanto la declaración de Sitios como de Monumentos Naturales se haría mediante Real Orden, con el consiguiente previo informe, o a propuesta del Comisario general de Parques Nacionales, después de reunir todos los datos que se consideren indispensables para esta declaración (art.4). Serían publicados en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, expresando en cada caso su denominación, término municipal y lugar del mismo en que radica, entidad propietaria, vías de acceso y una sucinta exposición de sus características (art.5).*

Con el **Real decreto de 26 de junio de 1929** sería creada la Junta de Parques nacionales: Ha de tenerse en cuenta que por mandato del Real decreto de 23 de febrero de 1917, derivado de la Ley que estableció en España los Parques Nacionales, se hizo, una relación de todos los pasajes más excelsos o sobresalientes del territorio nacional, y detenidamente estudiada, se vio que solo reunían las características precisas para ser declarados Parques Nacionales los que oportunamente lo fueron, por lo que conviene salir al paso de nuevas peticiones, toda vez que no es posible surjan en un espacio de muchos años las cualidades que se requieren para ser declarados Parques nacionales los parajes que actualmente no lo poseen. Habiendo de estar sometidos los montes que forman los Parques Nacionales a un régimen administrativo muy diferente al

de los demás montes públicos y privados, parece lógico y es de justicia que pasen a poder del Estado, librando a los pueblos y particulares propietarios de la carga que supone supeditar la economía del monte a la estética del paisaje y demás condiciones que requieren los Parques Nacionales. La Junta de Parques Nacionales estaría constituida por un Presidente, que sería el Director general de Montes del Ministerio de Fomento y el Presidente del Patronato Nacional de Turismo como vocales natos, y como vocales efectivos, un profesor de la Universidad de la Facultad de Ciencias Naturales, un representante de Obras Públicas, un Ingeniero de Montes con residencia en Madrid, que será el Jefe del Servicio Técnico de los Parques Nacionales, y tres más de libre elección del Ministro, número que podría ampliarse a juicio de éste (art.1). De la Junta se desglosaría una Comisión ejecutiva, compuesta del Comisario General de Parques Nacionales, de uno de los Vocales, que será Delegado Inspector de Sitios y Monumentos Naturales de Interés Nacional (...). La Junta de Parques Nacionales tendrá por misión esencial estudiar y poner en práctica los medios pertinentes a la protección y conservación de los Parques y Sitios Nacionales existentes, fomentando sus bellezas naturales, facilitando el acceso a ellos y muy principalmente la adquisición por el Estado de los terrenos que lo constituyan, y, en tanto que esto no se haya realizado íntegramente, regulando los aprovechamientos de manera que no padezcan detrimento en aquello que los caracteriza (art.6.1), igualmente será de su incumbencia proponer las declaraciones de Sitios o Monumentos Naturales de Interés Nacional (art.6.2). Quedan declarados de utilidad pública a los efectos de la expropiación forzosa, los Parques Nacionales (art.18.1), cuando se estime que, mediante obras, aprovechamientos industriales o forestales, pueden desaparecer o desmerecer las condiciones naturales en que estriba la belleza del paraje declarado Sitio o Monumento natural de Interés Nacional, si estos son de excepcional y extraordinaria importancia en el concepto que ha motivado tal distinción, la Junta de Parques Nacionales propondrá a la Superioridad la conveniencia de la adquisición por el Estado de tales sitios o parajes, previa la declaración de utilidad pública, si a ello hubiere lugar (art.18.2). Oído el parecer de la Junta, la Superioridad, con la información suplementaria que creyese oportuna, determinará cuál es el interés público dominante. Si la concesión de las obras y aprovechamiento industriales o forestales, o la adquisición por el Estado y conservación del paraje en sus condiciones naturales (art.18.3).

## **7. Una nueva regulación del Patrimonio Eclesiástico Español: El Real Decreto de 9 de enero de 1923.**

### **7.1. La aplicación del Real decreto de 9 de enero de 1923 en el ámbito del Real decreto-ley de 1926.**

El Patrimonio Eclesiástico fue objeto de una nueva regulación a raíz de la promulgación del **Real Decreto de 9 de enero de 1923**, por el que se limitaba la enajenación y exportación de los bienes que lo configuraban. En 1923 el Marqués de la Vega Inclán propondría ante el Ministerio de Gracia y

Justicia los límites de la exportación de los bienes religiosos de interés histórico y artístico, incitando para ello la colaboración del Episcopado español así como de la propia Santa Sede, recordando la existencia de una legislación que aparecía recogida en las bulas apostólicas, que prohibía la ilimitada venta de bienes religiosos. Al mismo tiempo enviaría el escrito al propio Rey, provocando una respuesta contundente del propio nuncio papal que enviaría una circular a los Cardenales, Arzobispos y Obispos recordando el deber de conservar dichos bienes. En una misma línea el pintor sevillano Gonzalo Bilbao, que había designado por el propio Vega Inclán conservador del Museo del Greco, denunciaría ante el propio Secretario Particular del Rey la venta de objetos artísticos religiosos en la ciudad de Sevilla. Nuevamente la intervención real será crucial, al trasladar el escrito al Ministro de Instrucción Pública y al Cardenal Arzobispo de esta diócesis con el objeto de que en caso de que sus comunidades vendiese sus propios bienes fuesen notificadas al Ministerio para así el Estado pudiera adquirirlo. El Episcopado hispalense respondería al pintor en estos términos: *El Rey leyó su carta con sumo interés (...) indicando que desea sepan que está siempre dispuesto a favorecer en cuanto pueda con sus Gobiernos o interviniendo si es preciso, como lo ha hecho con los Prelados, a fin de evitar que se repitan casos tan deplorables como el que vds. oportunamente denuncian*<sup>2924</sup>.

#### **7.1.1. El principio de intervención administrativa en el Patrimonio Monumental Eclesiástico insertado en la Exposición de Motivos del Real Decreto de 9 de enero de 1923.**

Los fundamentos a la hora de regular dicho decreto estarían basados en la pérdida patrimonial de los bienes eclesiásticos como así aparecía en la Exposición de los Motivos: *son todos los amantes de España, de su Historia, de su Cultura, los que se muestran alarmados y sorprendidos al ver que en estos últimos años se ofrecen ejemplos tan repetidos de enajenación y consiguientes exportación de obras de arte, monumentos de Historia, recuerdos gloriosos del pasado de la Patria cambiados los tiempos, trastornadas las instituciones y debilitada la vida económica de algunos institutos religiosos no es de extrañar que se haya llegado insensiblemente al actual caso de frecuente malbaratamiento (...) pero ha llegado a ocurrir en particular casos de un escándalo inverosímil y justificadísimo como fueron la venta de estatuas sepulcrales de varones cuyas rentas todavía disfrutaba la institución que las vendió; la enajenación de trofeos de victoria y de otros recuerdos personales de los donadores; la expatriación de obras de arte y la ya frecuente liquidación de las riquezas arqueológicas de la Iglesia aun sin haber cumplido los trámites del expediente académico. Se iba cuajando una verdadera necesidad social de respuesta ante la pérdida de un gran número de bienes pertenecientes a Instituciones eclesiásticas que habían sido objetos de ventas fraudulentas, dejando frustrados en muchos de los casos la acción del propio Estado, más aún como así aparecía reflejado en la propia disposición, muchos de estas colecciones de bienes había sido producto de muchos siglos fue acumulando, por*

---

<sup>2924</sup> MENENDEZ ROBLES, María Luisa, 2008, pp.132-133.

la generosidad de Monarcas, Magnates, Prelados, varones letrados y guerreros, en los monumentales edificios religiosos o civiles de España. Con la piedad y la devoción, consideraciones muy particulares referidas muchas veces al lugar de la sepultura, a las memorias perdurables que se dejaban establecidas, hacían que en la acumulación de tales artísticas e históricas reliquias nacionales, la voluntad de los donadores supusieron siempre que el Monasterio, la iglesia, la Capilla, el Instituto que recibiera el don lo habría de respetar perpetuamente, manteniéndole incólume en depósito de afección singular, o para perpetua memoria de la generosidad recibida. Mientras el Derecho canónico, como el civil, garantizaban el carácter sagrado de depósito de la prenda donada o legada, entonces justamente apellidada mano muerta, daba nueva seguridad de definitiva conservación de las alhajas de Arte o de recuerdo que se entregaban a su custodia. La decadencia de muchas de estas instituciones religiosas con el consiguiente detrimento económico de los mismos habían llevado a vender algunos de sus bienes, perjudicándose de esta manera el propio interés general: Cambiandos los tiempos, trastornadas las Instituciones, debilitada la vida económica de algunos institutos religiosos, no es de extrañar que se hayan variado los hábitos y las costumbres, y se haya llegado insensiblemente al actual caso de frecuente malbaratamiento, unas veces con razones de excusa y otras sin sombra de ella. Unas veces se ha sabido la venta de objetos de valor antes arrinconados, sin aprecio previo de su excepcional mérito histórico y artístico, y otras se han vendido, fragmentariamente descabaladas, riquezas tenidas como desecho. Pero han llegado a ocurrir en particular casos de un escándalo inverosímil y justificadísimo, como fueron la venta de estatuas sepulcrales de varones cuyas rentas todavía disfruta la Institución que las vendió; la enajenación de trofeos de victoria y de otros recuerdos personales de los donadores; la expatriación de las obras de Arte y la ya frecuente liquidación de las riquezas arqueológicas de las iglesias, aún sin haberse cumplido los trámites del expediente canónico, y la más de las veces sin noticia alguna que se comunicara a nadie, en tantos casos de ventas hecha subrepticamente, con las previsiones del sigilo más sospechoso, perjudicial hasta para el interés de quienes de tal manera enajenan. Al mismo tiempo que se criticaba este hecho, dejaba en constancia la actividad que la Iglesia había realizado en los últimos años sobre la conservación de sus bienes: Justo es decir que la Iglesia se ha preocupado de esta cuestión, y recientemente ha dictado disposiciones muy interesantes sobre esta materia, ya consignando en el artículo del Codex Iuris Canonici las prescripciones de los cánones 534, I; 1281, I y 1532, I, que taxativamente determinan que todos los objetos de mérito histórico o de valor artístico, cualquiera que sea su justiprecio en mérito, se considerarán res pretiosas, que no podrán enajenarse sin la autorización de la Santa Sede; ya en repetida circulares de la Nunciatura Apostólica, como las de 11 de abril de 1911, 21 de junio de 1914, 8 de abril de 1922 y la muy acertada de 7 de junio de 1922 del mismo año, en que se excita el celo de los Sres. Obispos para la conservación del caudal artístico que posee la Iglesia española. A pesar del esfuerzo realizado por las propias autoridades eclesiásticas, se instaba a la intervención del Estado, verdadero alegato al principio intervencionista que regía todas las formulas del ordenamiento jurídico: Sin desvirtuar en lo más mínimo esta acción, antes al contrario, como algo paralelo a la misma que tiende a robustecerla (dada la falta de eficacia de las disposiciones mencionadas, ya que a pesar de su publicación ha



*continuado realizándose los hechos que se intentaba evitar), el Estado, con su mayor fuerza coarsitiva, se propone por la disposición presente coadyuvar, al efecto de que en modo alguno en lo porvenir puede repetirse actos como los mencionados al principio, que constituye nuevos motivos de alarma para la opinión pública.*

Se dejaba claro asimismo en la Exposición de Motivos que con el presente decreto no se quería atentar contra el derecho de la propiedad de la Iglesia, aunque precisaba que al haberse superado el concepto tradicional de la propiedad, se reclamaba a favor del interés general, una nueva posición tutelar del Estado sobre estos bienes, por lo que se debía dar unas disposiciones en la que se limitaba la exclusiva disposición de la Iglesia, su legítima propietaria, sobre ellos, verdadero alegato de la nueva posición que los bienes privados tenían sobre las necesidades colectivas, y que quedaba expresado en los siguientes términos, dignos de hacer mención: *Con esto no se intenta en lo más mínimo violentar la jurisdicción de la Iglesia ni atentar a su derecho de la propiedad. Hoy, el derecho de la propiedad, ya radique en la persona individual o en la jurídica, no puede concebirse con aquel carácter exageradamente individualista que le asignara el Derecho Romano; por el contrario, la preponderancia del elemento social que en el derecho de la propiedad palpita, da lugar a que cada día se limite más el ejercicio de dicha facultad por un interés colectivo de orden superior. Al mismo tiempo, la acción del Estado, con un carácter marcadamente tutelar, interviniendo en la regulación de todas las manifestaciones de la vida nacional, por la complejidad de intereses que es preciso armonizar, se amplía constantemente. Y si estas consideraciones han dado lugar a disposiciones como los Reales decretos sobre inquilinato, que limitan el derecho de la propiedad en relación con el contrato de arrendamiento, tanto en lo que se refiere a la renta como al tiempo de duración, sin establecer una razón de identidad con el caso presente, a nadie podrá extrañar, ni mucho menos a las Autoridades eclesiásticas, que sin adoptar medidas radicales de Gobierno que hieran los sentimientos católicos o mermen la autoridad o jurisdicción eclesiásticas, y sin alterar tampoco en lo fundamental el reconocimiento de derecho de propiedad que el Concordato vigente otorga a la Iglesia, el Estado, ejercitando su acción propia, se vea en la precisión de seguir un camino análogo para sentar el principio y llevarlo a la vez a sus resultados prácticos, de que tratándose de esa riqueza nacional en la nota individual desaparece, consecuente con lo concordado, ratifica y reconoce de la manera más explícita que la propiedad y la administración de los objetos de mérito histórico o de valor artístico que existen en las Iglesias, Monasterios, Conventos y Ermitas de España, pertenecen a la Iglesia y comunidades que de ellas dependen; pero, a la vez, preciso se hace afirmar que el conjunto de esa riqueza artística constituye un patrimonio nacional en el orden más elevado del espíritu, como lo son también las gloriosas páginas de nuestra Historia, y con relación al cual el Estado debe adoptar las prescripciones necesarias para su conservación y custodia, y muy especialmente para que con él que no se especule y continúe emigrando por codicia, necesidad o ignorancia a países extranjeros. De esta manera se imponía claramente el interés general que representaban estos bienes, en este caso los valores monumentales en que estaban inmerso, sobre los puramente espirituales, que habían sido defendido tradicionalmente por la Iglesia, cuyo antecedente habría que remontarse a la legislación de la*

revolución del 68, y que posteriormente iban a impregnar el derecho contemporáneo,

### **7.1.2. Los bienes regulados.**

En el artículo 2º se establecían cuáles eran los bienes a proteger, reflejando la heterogeneidad de patrimonios que se consideraban digno de proteger, recogiendo posteriormente en la Ley de 1926, desglosándose en tres bloques fundamentales: las obras artísticas, las históricas y las arqueológicas: *Se entenderán comprendidas en la definición de obras artísticas, históricas y arqueológicas los monumentos y los fragmentos arquitectónicos, esculturas, pinturas, grabados, dibujos, cerámica, vidrios, medallas, inscripciones, tapices, telas, libros, Códices, manuscritos, muebles y, en general, todos los objetos incluidos en el concepto canónico de “res pretiosas” que tengan interés de arte, historia y cultura.* Cabe hacer mención como se incluye en este momento la concepción cultural, que aunque no aparece perfectamente definido su significado, puede ser un buen antecedente de la concepción de interés cultural, que sería recogida en legislaciones posteriores.

### **7.1.3. La autorización del Estado para la enajenación de los bienes del Patrimonio Eclesiástico.**

La autorización de la Administración en el caso del patrimonio religioso es un buen ejemplo de cómo el Estado comenzaría a intervenir en la propiedad privada de los bienes de carácter histórico-artístico, exponente de la transición que se estaba dando del Estado Liberal a una función social del Estado. Así en el artículo 1 se establece que *Las Iglesias, Catedrales, Colegiatas, Parroquias, Filiales, Monasterios, Ermitas y demás edificios de carácter religioso, no podrán sin autorización previa, expedida de Real Orden por el Ministro de Gracia y Justicia, proceder a la enajenación válida de las obras artísticas, históricas y arqueológicas de que sean poseedoras.* Sería denegada la autorización en los siguientes casos: *No será concedida la autorización para enajenar en aquellos casos en que hayan dejado de cumplirse los trámites preceptuados en los cánones 1530, 1531, 1532 y sus concordantes del Codex Juris Canonici (art.3). Se denegará también en todos los casos en que el objeto o monumento se deba a la liberalidad de los Monarcas o de los pueblos mismos, y cuando se trate de enajenar bienes que hayan sido declarados del Estado por legislación no derogada, si no se ha hecho expresa o absoluta donación de ellos con las autorizaciones legales precisas (art.4).*

El Real Decreto de 1923 perfilaría el marco institucional muy preciso, jugando un papel primordial los Ministerios de Gracia y Justicia, que en caso de autorizarlo se lo comunicaría al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, quienes tramitarían el expediente, para lo que se pediría dictamen a las Reales Academias que corresponda y se aplicará las reglas establecidas sobre conservación de monumentos y obras de arte (art.5). Posteriormente el Ministro de Gracia y Justicia comunicaría este Real Decreto a los arzobispos y obispos, para que no autoricen enajenaciones ni tramiten aquellas que canónicamente exijan superior autorización; ni lo ejecutaran ni las

cumplimentaran en contradicción al Decreto (art.6). Conocemos un amplio número de informes de la Real Academia de la Historia desaconsejando la venta de bienes religiosos de interés histórico y artístico. En algunas ocasiones se daban discrepancias entre los informes de los párrocos con los elaborados por las propias Academias, como aparece reflejada en el **Informe de 12 de enero de 1927** emitido por la Real Academia de la Historia sobre la solicitud de enajenar varias sillas corales góticas de la iglesia de San Juan Bautista (Olmedo, Valladolid), en el que manifestaba que *lo primero que ha llamado su atención al hacer aquél examen es la discrepancia que se observa entre los hechos que consigna el párroco solicitante y los comprobados por el Académico ponente del dictamen emitido por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (...).* Resaltaba que en el examen pericial realizado por el presbítero D. Luis Iñigo, se certificaba que *eran de nogal tallado, de estilo llamado gótico y al parecer de fines del siglo XV, agregando que la talla es basta y pobre y que carece de valor artístico; pero, frente a la apreciación de este perito, y en abierta contradicción de su dictamen, aparece el del Sr. Académico de Bellas Artes, según el cual, la talla es decorativa gótica (...) para afirmar que las sillas de Olmedo tienen muy notable mérito artístico.* Al mismo tiempo se discrepaba entre el propio régimen patrimonial de los bienes, por lo que *según una certificación expedida por el mismo párroco en 27 de marzo de 1926, las sillas corales de que se vienen hablando, no proceden de donación del pueblo ni de particulares, sino que fueron construidas en 1519 y costeadas con fondos propios de la entonces parroquia de San Juan Bautista, afirmación en la que, sin duda alguna, se ha padecido error, pues, aparte de que no se alega ningún documento que pruebe su exactitud, es incuestionable que tales sillas no se construyeran para dicha iglesia ni con fondos de ella; primero: porque como se asegura en el Informe de la Academia de Bellas Artes (...) no encajan en aquel sitio (...) y porque según todos los antecedentes y probabilidades, la sillería a que unas y otras pertenecieron fueron construida, no para la iglesia de San Juan, sino para el monasterio de jerónimos de la Mejorada, que estuvo situado cerca de Olmedo y la cual, al desamortizarse aquella casa, fue trasladada a la parroquia de San Andrés (...).* En virtud del mismo, la Real Academia *ha juzgado que las sillas cuya enajenación se pretende son de mérito artístico suficiente para aconsejar al Estado que se conserven a perpetuidad en el servicio del culto a que ahora están destinadas, por lo que en principio las sillas no serían vendidas.*

En otras ocasiones se procedía a la autorización de venta como el caso de la petición formulada por el Cabildo de Valladolid para enajenación de obras artísticas, consistente en 28 tiras de colgaduras bordadas, para la que fue nombrada una Comisión formada por los Sres. Duque de Tovar, D. Fernando Álvarez de Sotomayor y Don Narciso Sentenach, con objeto de emitir informe, que sería redactado el 18 de abril de 1923, por la que entendía que no había inconveniente *en autorizar al Cabildo Catedral de Valladolid para la enajenación de los objetos consignados en el expediente de referencia, al tenor de lo que provienen las disposiciones del Real decreto de 9 de enero último, conforme al que este asunto se viene tramitando, fundamentado en el hecho de que aunque pudieran tener un*

cierto valor histórico y artístico, ya que *es de observar en ellos que, aunque de gran mérito todos y en más perfecto estado de conservación las tiras bordadas, lo que les da una alta apreciación, no por ello constituyen ejemplares de rareza tal que lo hagan estimar como únicos en su especie ni de excepcional importancia, pues de su género y estilo abundan los ejemplares en otros templos (...). Lo propio puede decirse de los libros de coro, algunos de sobresaliente méritos por sus iniciales, orlas y miniaturas; pero en general son de corriente ejecución y sin abundancia de detalles artísticos (...)* la Comisión no estima los objetos en cuestión como de aquellos que por sus excepcionales condiciones sean acreedores a que el Estado se imponga los sacrificios necesarios para que pasen a figurar entre las colecciones de algún Museo de la Nación, teniendo además en cuenta la aplicación del producto que de ellos se pueda obtener, para el coste de obras muy plausible iniciativa en el templo<sup>2925</sup>.

Se intentaba siempre evitar la venta de los bienes al extranjero, por lo que en algunos casos no se tenían inconveniente siempre que quedase depositado en algún museo público, como podemos contemplar en la solicitud de venta de objetos artísticos pertenecientes a la iglesia parroquial de Santa María de Barberá instado por el Arzobispo de Barcelona, ya que en el Informe de la Real Academia de San Fernando emitido el 17 de diciembre de 1924, recalcaría que aunque desconociera la pintura, y por tanto, no podían emitir el dictamen técnico que reclamaba el Ministerio, no hallaban *inconveniente en que las obras motivo de este informe pasen a ser propiedad de un Museo español, aunque no sea del Estado, aconsejando con el mayor respeto a la Superioridad, exija la garantía de que las pinturas de referencia no saldrán de la nación*<sup>2926</sup>. Incluso en algunas ocasiones se llegaría a autorizar la venta a algunas comunidades religiosas que estaban en difíciles condiciones económicas, con la condición de que dichas obras no fueran vendidos más allá de los límites del país. En el caso del expediente incoado por la abadesa del Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, solicitando autorización para la venta de un medallón de mayólica, que poseía el Monasterio, en el Informe de la Real Academia de Bellas Artes de 3 de julio de 1925 se precisaba que a pesar del valor monumental que tenía dicha pieza, que había sido atribuida por la Comisión como *obra próxima al fundador del taller de los Robia, estimando que dicha obra, por su capital importancia, no debe ser enajenada para fuera de España (...)* constándole la pobreza de las religiosas que ocupan el convento, por lo que les son muy precisos fondos con que subvenir a sus necesidades, estima que debería hacerse cuanto posible fuera para que se verificase la adquisición para Valencia y se depositara en el Museo de Bellas Artes, habiendo nombrado para ello una Comisión,

<sup>2925</sup> Informe de la Real Academia de Bellas Artes sobre la petición formulada por el Cabildo de Valladolid para enajenación de obras artísticas en *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Año XVI, Núm.66, Madrid, 30 de junio de 1923, pp.104-105.

<sup>2926</sup> Informe de la Real Academia de San Fernando acerca del expediente incoado por el Arzobispo de Barcelona en solicitud de que se autorice la venta de objetos artísticos pertenecientes a la iglesia parroquial de Santa María de Barberá en *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Año XVII, Núm.72, Madrid, 31 de diciembre de 1924, p.20.

*que entiende de arbitrar los recursos necesarios (...) por lo que estimaba la Real Academia de Bellas Artes muy plausible toda gestión entablada en este sentido, pero nunca con la contingencia de que pudiera salir para el extranjero, lo que a toda costa hay que evitar; por ello estima que no debe concederse su enajenación a ningún particular, la que tanto facilitaría su exportación más o menos lejanamente*<sup>2927</sup>. En los mismos términos encontraríamos la autorización se le concedería a la Priora del convento de Religiosas Carmelitas Descalzas de Cuerva (Toledo) para vender un cuadro original de El Greco, por la Real Academia de San Fernando, que en su Informe de 14 de diciembre de 1925 precisaba que *la Dirección General de Bellas Artes, con fecha 20 de octubre próximo pasado, remitió a esta Real Academia para el informe que proceda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º de la ley de 1923, relativo a la enajenación de bienes artísticos de la Iglesia, un expediente, incoado a petición de la Priora del Convento de Religiosas Carmelitas de Cuerva (Toledo), solicitando autorización para enajenar un cuadro de su propiedad, que representa a San Francisco, original de El Greco, a fin de remediar, con el producto de su venta, la apurada situación económica de aquella Comunidad*. En el propio expediente presentado se hacía constar el ofrecimiento hecho al Estado para su adquisición, y la negativa de éste fundada en los dictámenes de esta artística Corporación y del Patronato del Museo del Prado, que coinciden en no mostrarse propicios a la adquisición del cuadro, habida cuenta del extraordinario número de obras del mismo insigne autor que atesora nuestra Pinacoteca nacional. La autorización debería darse en los términos de la Real Academia de Bellas Artes, advirtiéndole que si el cuadro que pretende vender hubiera de salir de España, habrá de tener en cuenta lo que, para estos casos, dispone la Real orden de 29 de agosto de 1922, relativa a la exportación de objetos artísticos<sup>2928</sup>.

En algunos casos no sería autorizada la venta al no poder demostrar el supuesto propietario su dominio sobre el bien, como ocurrió con Salvador López Sanjusto, que alegando ser propietario de una verja del siglo XVI, que estaba situada en la capilla particular llamada del Deán, de la iglesia de San Nicolás de Ubeda, intentaría venderla en el extranjero o en su defecto al Estado. Sin embargo, por la Real Orden de 8 de septiembre de 1926 sería desestimada su pretensión. La lectura de esta disposición nos puntualiza algunas consideraciones dignas de mencionar. Una primera oposición vendría de la propia Comisión de Valoración de objetos artísticos destinados a la exportación, de Sevilla, que *informó que por ser dicha reja o verja de hierro forjado, obra del famoso rejero Juan Álvarez de Molina, hecha en las postrimerías del siglo XVI, dorada y estofada por el pintor Antonio de Aguilió, constituye un notable*

---

<sup>2927</sup> Informe de la Real Academia de San Fernando incoado por la abadesa del Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, solicitando autorización para la venta de un objeto artístico perteneciente a dicho monasterio en *Boletín de la Real Academia de San Fernando*, Segunda Epoca, 30 de septiembre de 1925, pp.115-116,

<sup>2928</sup> Informe de la Real Academia de San Fernando acerca de la autorización solicitada por la Priora del convento de Religiosas Carmelitas Descalzas de Cuerva (Toledo) para vender un cuadro original de El Greco en *Boletín de la Real Academia de San Fernando*, Segunda Epoca, Núm.76, 31 de diciembre de 1925, pp.180-181.



*ejemplar y verdadera joya artística, por lo que no debe autorizarse su venta, debiendo ser adquirida por el Estado y conservarse en su actual emplazamiento (...) por tratarse de un monumento comprendido en el Real decreto de 9 de enero de 1923 sobre enajenación de obras artísticas y arqueológicas. Pero no cabe duda que sería la oposición del Obispo de Jaén y el propio párroco el que pondría en cuestión la legalidad de la venta, al hacer constar que la parroquia era la única dueña de la capilla, por lo que el patrono de la capilla era un mero usufructuario de ésta, de sus bienes y rentas, aportando en la propia escritura fundacional que se prohibía a los patronos que lo sucedieren que no podían vender, trocar, cambiar ni enajenar en manera alguna estos dichos bienes y rentas de este dicho Patronazgo ni cosa alguna de los a ellos anejos... y si de hecho contra esta mi prohibición los enajenare, quiero y prohíbo que no valga la dicha enajenación, ni pase al dominio ni posesión en otra persona que recibiera la dicha enajenación; sino que siempre los dichos bienes y rentas estén en pie conforme es esta disposición". La propia naturaleza inmueble del bien impedía la venta como apuntaría la propia Asesoría Jurídica, puesa tenor del artículo 334, números 3º y 4º del Código Civil, la reja mencionada tiene naturaleza inmueble, de donde se infiere que no puede ser objeto de enajenación como cosa aislada del edificio, quedando invalidado la venta, por lo que si el reclamante la ha comprado de buena fe, creyéndola susceptible de arrancamiento, transporte y exportación, su consentimiento, al adquirirla, estaría viciado de error recaído sobre la sustancia misma de la cosa, conforme al artículo 1266 del Código Civil mencionado; sin que en el recibo presentado por el comprador se acredite que el vendedor era o es tal patrono, y que a todo evento tuviera capacidad para vender la verja; y que como todas las cuestiones de nulidad en una venta, naturaleza de la cosa vendida y capacidad previa de los otorgantes implicaban cuestiones civiles, limitaba su dictamen al extremo de estar comprendida en las prohibiciones del Real decreto de 9 de enero de 1923, por lo que debía remitirse el expediente al Ministerio de Gracia y Justicia. De ahí que se puntualizaba que para la adquisición de un objeto arqueológico por el Estado se precisa que el vendedor acredite cumplidamente su calidad de dueño del propio objeto, justificación que en modo alguno presenta el solicitante, toda vez que el recibo de pago de parte del precio, único documento y privado que ha exhibido a un Notario para demostrar el dominio de la reja en cuestión, ni acredita que ostente el carácter de Patrono de la Capilla, en cuyo arco de entrada no enclavó la verja, ni que él tuviera capacidad legal para enajenarla, a más de que ni está legalizada tal firma ni el documento podría tener fecha cierta en perjuicio de tercero, por no reunir al efecto ninguno de los requisitos que exige el artículo 1.227 del Código Civil, pues ni se ha probado que haya fallecido algunos de los otorgantes ni que algún funcionario público tomado razón por motivo de su oficio del propio documento, ni que éste se haya incorporado a algún Registro público(Considerando 1º), al mismo tiempo que se daría la razón tanto Obispo de la Diócesis como al Párroco correspondiente, al haberse opuesto a la pretensión del solicitante, negando su dominio sobre la verja afirmando que el Patrono de la Capilla de cuya entrada se empotró carece de capacidad para la venta, que se prohíbe en absoluto en la escritura fundacional (Considerando 2º).*

#### **7.1.4. El procedimiento sancionador por venta fraudulenta en virtud del artículo 8º del Decreto-Ley de 1923.**

Se incluía un procedimiento sancionador al considerar nulo la enajenación de los bienes pertenecientes del Patrimonio Eclesiástico, que no siguiera las formalidades del Decreto, por lo que el Estado adoptaría las medidas necesarias para incautarse del objeto mal vendido y del precio de la venta, entregando el objeto al Prelado, siempre de que diera garantía de su custodia, por lo que en caso contrario se entregaría al museo nacional o diocesano que correspondiese, destinando el precio de la venta nula a los establecimientos de beneficencia (art.8.1). La sanción establecida será sin perjuicio de las normas canónicas, y en su caso, de las penales de orden común aplicables a cada fracción (art.8.2). En el artículo 9 se reforzaría el papel sancionador del Ministerio de Gracia y Justicia, que procedería al *exacto cumplimiento de este Real Decreto, así como a investigar y recuperar cuantos objetos se hallen en tramitación de venta* (art.9), promovándose los expedientes de nulidad y responsabilidad. En virtud de la Ley de 1923 se fueron previniendo un amplio número de ventas fraudulentas e incluso llegando a su anulación y sanción por parte del vendedor, incluso en el caso de que fueran algunas órdenes religiosas, como ocurrió con la venta irregular de antigüedades perteneciente al convento de San Francisco de Lucena<sup>2929</sup>. Como así había quedado reflejado en el expediente el 18 de septiembre de 1924, Fray Lorenzo Cerdán, Superior del Convento de San Francisco, en Lucena, provincia y diócesis de Córdoba, de acuerdo y conformidad con sus compañeros Hermanos del mismo Convento y autorizado por el Reverendo Padre provincial de su Orden, vendió a Don Joaquín López Sánchez, por precio de 20.450 pesetas, todos los artesonados de las dos galerías de los claustros de la planta baja del citado Convento y el artesonado árabe de la caja escalera del mismo, *resaltándose que no se solicitó previamente autorización de este Ministerio para dicha venta y que la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades entendió que esos artesonados constituyen antigüedades de verdadero valor artístico y que el mismo concepto se deduce de las diligencias practicadas por la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de Córdoba*. Como así quedaba patente en el propio Informe elaborado por la Real Academia de la Historia, del que recogemos algunos de sus fragmentos, el hecho sería denunciado al propio Delegado Regio de Bellas Artes, después que *Joaquín López, residente en Madrid (...), el cual se titulaba arquitecto y mueblista de la Real Casa se trasladase a Lucena para hacerse cargo de los artesonados y dirigir los trabajos de su desplazamiento, embalaje y transporte a la estación de ferrocarril (...) Pero los vecinos del convento se percataron de lo que estaba haciendo (...) y no faltó quien hiciera la denuncia*

---

<sup>2929</sup> BARBADO PEDREA, María Teresa; CASTILLO, María del Rosario “Los artesonados del convento de San Francisco de Lucena: la recuperación de un patrimonio histórico-artístico” en *El Franciscanismo en Andalucía*, Vol.2, Córdoba, 2002, pp.20-30.

*al Delegado Regio de Bellas Artes, el cual se apresuró a informar de lo que sucedía al Obispo de la diócesis, en poner el hecho en conocimiento del Gobernador Civil de la provincia y en dar cuenta del mismo al Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (...). Ya en virtud de las órdenes circuladas, cerca de Madrid y en la estación o apartadero del Cerro de la Plata, fue encontrado y detenido un vagón, que transportaba dos de los artesonados, el de la escalera principal, de 24 metros cuadrados y traza mudéjar, el más interesante sin duda de todos ellos, y el de una de las galerías del patio del convento (...). En cumplimiento del encargo de la Comisión de Monumentos, Don Enrique Romero de la Torres se trasladó seguidamente a Lucena. Visitó el convento de San Francisco y pudo comprobar que era cierto en absoluto la denuncia formulada: faltaba el artesonado de la escalera; las naves norte y este del claustro habían sido despojadas de los que tuvieran (...) Interrogó a los religiosos del convento, los cuales declararon que los habían vendido con la condición de que no salieran de España y en la suma de 25.250 pesetas al vecino de Madrid, don Joaquín López (...).*

Finalmente sería promulgada la **Real orden de 16 de enero de 1926** por la que se quedaba declarada nula la venta de artesonados del Convento de San Francisco de Lucena, al considerar que 1º) la enajenación de las obras artísticas, históricas o arqueológicas de que son posesiones de las Iglesias, catedrales, colegiatas, parroquias, filiales, monasterios, ermitas y demás edificios de carácter religioso se rige por los preceptos de 9 de enero de 1923, siendo, según el mismo, competente el Ministerio de Gracia y Justicia para adoptar las resoluciones que proceden; 2º) que los artesonados de cuya venta se trata debían entenderse comprendidos entre los que define el artículo 2º del mencionado Real decreto, ateniéndose al parecer de las entidades técnicas que han informado sobre el asunto, por lo que habían sido calificados entre los bienes tutelados por el Estado; 3º) Que las circunstancias de aparecer en el contrato como vendedor el Superior del Convento, sin que nadie hubiera discutido su personalidad para contratar con dicho carácter, era bastante para convencer de que el Monasterio era el poseedor de los objetos vendidos, por lo que se había demostrado el estado de la propiedad del bien y el titular del mismo; 4º) Que aunque se había instado por la irretroactividad de la Ley, en la petición formulada por el mismo vendedor en su instancia de 21 de diciembre de 1924, por la que se autorizase la venta ya realizada no podría surtir efecto alguno por cuanto el repetido Real decreto de 9 de enero de 1923 exigía de modo terminante para que estas ventas fueran válidas que la autorización fuera previa; 5º) Se dejaba claro que tampoco se habían cumplido los trámites preceptuados en los Cánones 1.530, 1.531, 1.532 y sus concordantes del Codex juris canonici. En base a estas consideraciones, y en aplicación al artículo 8º de la Ley de 1923 se establecería las sanciones siguientes: 1º Que se procediese a la incautación de los objetos mal vendidos y del precio de la venta; 2º) Que se entregasen dichos objetos al Reverendo Obispo de Córdoba, si garantizase su custodia, procediéndose en caso contrario, a entregarlos al Museo que

correspondiera; 3º) Que se participe al Ministerio de Hacienda esta resolución para que pudiera adoptar las medidas conducentes a que por sus organismos provinciales correspondientes ingresase en el Tesoro la cantidad de 24.500 pesetas, percibido por el vendedor como importe de la venta; 4º) Que practicado el ingreso se pusiera a disposición de la Autoridad Municipal de Lucena, para su destino, conforme al artículo 956 del Código Civil y 5º) Que no se hiciera deducción alguna por el concepto de premio al denunciante.

#### **7.1.5. La Creación de los Museos Diocesanos.**

La aparición de los Museos Diocesanos había sido una realidad desde la etapa de la Restauración, instando como novedad al propio Gobierno a fomentar sus fundaciones, que tendría como finalidad la mejor conservación y custodia de las riquezas artísticas, históricas o arqueológicas de cada Diócesis (art.7). como apunta María Bolaños, los únicos casos dignos de resaltar fueron los museos diocesanos de Zamora (1926), de Burgo de Osma (1928) y Burgos (1930), además del granadino, cuyo origen era de naturaleza monográfica, que inaugurado en 1929, se fundaría como Museo de Alonso Cano, transformándose posteriormente en Museo Catedralicio. No sería ya hacia 1949 cuando comenzaron a seguir otros museos de este carácter auspiciada bajo la ideología franquista<sup>2930</sup>.

#### **7.2. La tutela pública sobre un bien de interés religioso en la dictadura de Primo de Rivera: El caso del Monasterio de Poblet.**

Desde 1844 se había hecho entrega ambos monasterios a la Comisión de Monumentos de Tarragona. El informe para la declaración de Monumento Nacional será realizado por Arturo Mérida y será publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1921. En el Informe de las propiedades del Monasterio de Poblet y sobre las ocupaciones de particulares que sobre los terrenos del monasterio ha observado la Comisión de Monumentos de Tarragona. 1 de diciembre de 1925. En virtud de los antecedentes que quedan constatados, los delegados que suscriben proponen a la Comisión: 1º) Que se diese cuenta a la Superioridad del estado actual de las propiedades de Poblet; 2º) Que el Gobierno se posesionase inmediatamente de los terrenos y edificios siguientes que no habían sido vendidos; 3º) Que se procediese a la delimitación de los terrenos vendidos. El Gobernador Civil remitiría el Informe a la Real Academia de la Historia, y ésta a su vez remitiría una Minuta de Oficio a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de en la que se denunciaba las ocupaciones realizadas por particulares sobre el Monasterio de Poblet. En algunos Oficios de la Real Academia de la Historia se denunciaría las depredaciones y ocupaciones realizadas por particulares contra el Monasterio de Poblet, por lo que se pedían que se dictasen medidas para conservar el monumento, como fue la del 23 de junio de 1926 en la que se denuncian las depredaciones. Finalmente sería constituido el Patronato de Poblet el 25 de

---

<sup>2930</sup> BOLAÑOS, M., 1997, pp. 300-301.

julio de 1930, por el que se encomendaba *promover y encauzar las iniciativas regionales y locales, en favor del Monumento, de su habilitación, de visita, estudio y atracción cultural y turística, para lo que habría de habilitarse la iglesia mayor para el culto público, así como una sección de edificios donde pueda reunirse el Museo, la Biblioteca y el Archivo del Monasterio. Tenemos en la actualidad elementos suficientes para hacer buenas instalaciones artísticas y culturales en las dos grandes salas.* Por la **Real orden de 14 de junio de 1930** sería nombrado Presidente del Patronato a Eduardo Toda Güell, Presidente de la Comisión de Monumentos de Tarragona y por otro Real decreto de la misma fecha a los vocales, Ramón García Alesson, Conde de Asalto, Marqués de Grigny, Luis Plandiura Pou, Ramón Sabaté, Jaime Barrera Escudero y Fidel de Moragas.

El anuncio de la interpelación del diputado Garran acerca del Real decreto de 9 de enero de 1923: *Este Real decreto tiene en su contexto disposiciones contradictorias, y, aparte de los preceptos que justifiquen su observancia, hace la declaración de que el Gobierno prepara una disposición por acuerdo entre ambas potestades –Iglesia y Estado–; como esta disposición no se ha dictado, y como creo que el decreto a que me refiero carece de requisito de la conformidad entre ambas potestades, me encuentro en el caso de reclamar contra la redacción de ese decreto y pedir que se derogue o se deforme (...) es para lo que anuncio esa interpelación (...)*<sup>2931</sup>. Nuevamente, no podemos calificar de buen resultado la aplicación del Decreto de 1923, que en la Exposición de Motivos del Decreto de 22 de mayo de 1931, que lo reconocía como una disposición bien intencionada, pero sin ningún resultado ya que los obligados a obedecerlas buscaron subterfugios para burlarlas y porque faltó al poder público la energía para castigar las transgresiones.

### **7.3. La reacción de la Iglesia a la vigencia de la Ley de 1926: La Declaración del Episcopado español del 28 de noviembre de 1929.**

Aunque el Real Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 no hacía referencia explícita a los bienes de la Iglesia, exceptuando en su artículo 16, referente a los monasterios y conventos para regular la entrega de los pertenecientes al Estado, con una mención de la lista de monasterios y ermitas (art.17), se desataría una clara oposición de la Iglesia sobre la posible tutela que implicaba la promulgación de la nueva Ley, que incluso<sup>2932</sup>. Al dictarse la primera regulación del Tesoro Artístico Arqueológico Nacional por el Real-decreto de 9 de agosto de 1926, con motivo de los lamentables incidentes provocados por la llamada defensa del tesoro artístico de nuestra patria en cierto sector de la prensa, a propósito de esta denominación, la Iglesia reaccionaría con publicación de la **Declaración del Episcopado español del 28 de noviembre de 1929**. Dos cuestiones primordiales se barajaban en la defensa episcopal: el hecho de achacar a la Iglesia la no preocupación de su patrimonio y el eterno

<sup>2931</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso, Núm.24, Sesión de 6 de julio de 1923, p.771.

<sup>2932</sup> MARTINEZ BLANCO, Antonio *El Patrimonio Artístico y Documental eclesiástico como parte del patrimonio nacional en España*, Anales de la Universidad de Murcia,



problema de la propiedad eclesiástica de los bienes eclesiásticos de interés histórico y artístico, con la correspondiente crítica de la intervención del Estado. En cuanto a la conservación del patrimonio, se lamentaba en el escrito como había sido despojado durante amplias etapas de sus bienes: *Quien dirige serenamente la mirada sobre la serie de naufragios en que ha ido pareciendo el patrimonio artístico de España por causa de las invasiones extranjeras, de la desamortización eclesiástica y de las revueltas políticas durante las últimas centurias, habrá de confesar, si no le ciega la pasión y el odio, que nadie aventajó a la Iglesia en diligencia, en abnegación y en celo, por salvar los restos que todavía se conservan del grande e inapreciable tesoro de arte acumulado por nuestra Patria en el apogeo de su grandeza, exaltando el papel de la Iglesia sobre el legado patrimonial español: No brillarían con tanto esplendor las Exposiciones de Arte de Barcelona y Sevilla si las Catedrales, las Parroquias y los Monasterios no hubieran abierto sus puertas generosamente para aportar las joyas que con solicitud y desvelos llegaron a preservar de la destrucción, de la rapacidad o del saqueo. No figurarían en los Museos Públicos muchas de sus preseas artísticas, si no hubieran sido salvadas por la Iglesia. Y el contraste flagrante de la opulenta riqueza artística salvada con la estrechez y penuria que muchas veces hubieron de sufrir los llamados a guardarlas, enaltece todavía más el noble espíritu con que la Iglesia ha conservado sus tesoros artísticos. Saltan, pues, a la vista, la notoria injusticia y la ingratitud con que han olvidado esto hechos patentes quienes se han atrevido a lanzar acusación tan gratuita; y se echa de ver a todas luces la necesidad de garantizar, apoyar y fortalecer por todos los medios la acción de la Iglesia que ha sido la principal y en ocasiones casi la única que custodió la riqueza artística de nuestra Patria. Pero sería el derecho de la propiedad eclesiástica sobre sus bienes el núcleo vital de la Declaración: Esta acusación, insinúa que la Iglesia no tiene sobre las cosas artísticas de su patrimonio un dominio perfecto, tan perfecto como el de cualquier otro propietario sobre sus bienes y tan sagrado como lo declaran los preceptos canónicos (...) No es necesario demostrar con incontables citas del derecho canónico vigente, oficialmente reconocido en nuestra Patria, este derecho de propiedad de la Iglesia sobre todos sus bienes, sin distinción ninguna; pues cuanto han hojeado, siquiera sean rapidísimamente, las páginas más salientes de la Historia de la Iglesia, les consta con claravidencia cuán celosa se ha mostrado ésta siempre en la reivindicación de este sagrado e inviolable derecho de propiedad sobre sus bienes. Basta citar el canon 1495 del vigente Código de Derecho Canónico, en la cual se afirma que la Iglesia Católica y Sede Apostólica tiene derecho nativo, libre e independientemente de la potestad civil, de adquirir, retener y administrar bienes temporales, para conseguir sus fines propios. Asimismo, las iglesias particulares y las personas morales que gozan de personalidad jurídica otorgada por la autoridad eclesiástica, tienen derecho de adquirir bienes temporales, d retenerlos y administrarlos según las normas de los sagrados cánones. Se instaba a que el derecho de la Iglesia a adquirir bienes estaría ratificado por el propio artículo 41 del Concordato vigente del 16 de marzo de 1851, precepto que fue a mayor abundamiento ratificado por el Código Civil vigente en su art.38, en el que dispone, en lo referente a capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases. Podrían en entredicho el carácter inviolable del Tesoro Artístico Nacional, en cuanto que si implica un derecho de propiedad del Estado sobre los objetos de arte que radican en*

*la Nación, con anulación o merma de los derechos de propiedad que sobre referidos objetos de arte por títulos legítimos corresponden a los particulares o entidades jurídicas que legítimamente los adquirieron, no sólo no está fundamentado en derecho natural, ni en el derecho positivo de la Iglesia, ni aun en el de nuestra legislación civil tradicional, sino que es una creación arbitraria de nuestros días que sirve de pretexto para campañas tendenciosas y que ofrece gravísimos peligros sociales para el porvenir, por basarse en un principio que viene a destruir los fundamentos básicos del derecho de propiedad particular. En este sentido, mientras la Santa Sede no trace otras normas de conducta, la Iglesia, si se llegara a algún día a ver violentamente despojada de sus sagrados derechos por fuerza mayor, no podría menos de elevar ante los fieles su más sentida y enérgica protesta. Más si la denominación de Tesoro artístico nacional se aplica en sentido más amplio y, dejando a salvo los derechos de la propiedad privada, se refiere tan solo al común anhelo de que se conserve dentro de la Patria ese tesoro que nos legaron nuestros padres, tan ricos en fe como en generosidad cristiana para con su Madre la Iglesia, entonces la Historia vendría a demostrar que han sido precisamente los Prelados los principales creadores, conservadores y defensores del Tesoro artístico nacional.*

Al mismo tiempo sería motivo de crítica el Real decreto de 2 de julio de 1930, al exigir que los objetos integrantes del Tesoro Artístico la subasta pública y la escritura notarial, lo que produce una reacción del Cardenal Segura con la publicación de la **Instrucción de 15 de julio de 1930** del Emmo. Sr. Cardenal Primado sobre enajenación de obras de arte pertenecientes a la Iglesia, estimando como Principios inaceptables algunos términos que aparecían en el Preámbulo del Real decreto como los “*intereses encontrados del legítimo poseedor y de la colectividad*”, “*del patrimonio cultural de la colectividad*”, “*de obras que deben ingresar en el patrimonio privativo de la comunidad*”, y “*del patrimonio colectivo de valor inapreciable*”. Estas frases vagas e imprecisas en derecho sirvieron en no lejana campañas para impugnar en la prensa el tesoro artístico eclesiástico y han vuelto a ser reproducidas en estos mismos días en determinada prensa con evidente detrimento de la verdad y de la justicia. Nuevamente se volvía a referir al carácter absoluto del derecho eclesiástico de la propiedad de los bienes de interés histórico y artístico: *Sentada la doctrina, solidísima y cierta, que se expone en la declaración pastoral del Episcopado sobre la indiscutible propiedad que de su tesoro artístico tiene la Iglesia, se deduce como consecuencia inmediata no sólo el derecho, sino el deber estricto de los Prelados de defender esta propiedad de todo posible conato contra ella (...)* El Decreto Ley de agosto de 1926, que de hecho ha tratado aplicarse a los bienes de la Iglesia sin la anuencia de la Santa Sede, implica notoriamente la privación de varias de las facultades que integran el dominio de la Iglesia sobre sus bienes. Se aludía a la contraposición de los intereses de la Iglesia incluidos en el artículo 41 del Concordato de 1851 con algunas disposiciones del Real Decreto de 1926: *la inclusión de algunos bienes inmuebles eclesiásticos en el catálogo del llamado tesoro artístico nacional, lleva, entre otras, estas limitaciones del derecho pleno de la propiedad. 1º La imposibilidad de demolerlo todo o en parte sin la autorización del Ministerio de Instrucción Pública (art.8 del referido Decreto-Ley). 2º La imposibilidad de alterar su estructura interior o exterior en todo o en las partes, sitios o habitaciones, patios o fachadas, sin la autorización expresa del Ministerio de*

*Instrucción Pública (Art.11 del mismo Decreto-ley). 3º La expropiación del inmueble cuando el propietario, requerido para proceder a su reparación o consolidación, no lo haga en el plazo fijado (art.12). 4º La posibilidad de que el Gobierno ocupe el edificio y conceda su conservación y custodia a las Corporaciones, Entidades o particulares que ofrezcan las necesarias garantías (Art.15 del citado Decreto). La inclusión de un objeto mueble eclesiástico en el catálogo del tesoro artístico nacional produce, entre otras cosas, las consecuencias siguientes: 1º Queda prohibida su exportación sin el permiso del Ministerio de Instrucción Pública (Art.26 del referido Decreto-Ley). 2º Se convierten en bienes imprescriptibles e inalienables (Art.27 del mismo). 4º Se declara nula su venta (Art.33 del Decreto Ley repetido). Como el aplicar estas disposiciones a los bienes propios de las iglesias era producir menoscabo en aquella propiedad eclesiástica que había de ser solemnemente respetada en virtud del art.41 del vigente Concordato de 1851, estimó el Episcopado español que en las disposiciones del Decreto Ley no concordado de 1926 referente al tesoro artístico nacional no podían en justicia extenderse a los bienes que integran el patrimonio de la Iglesia. En el ámbito de la provincia de Sevilla, prácticamente con los mismos términos sería promulgada la **Circular de 25 de agosto de 1930 sobre derecho de propiedad de la Iglesia del Arzobispado de Sevilla.***

Una buena muestra de la contraposición de algunos sectores en el ámbito de la intervención tutelar del Estado sobre el Patrimonio Eclesiástico Monumental puede corresponder a Ramón Bigador en el artículo publicado en la revista *Razón y Fe*, el 10 de diciembre de 1929, con el título “El patrimonio artístico de la Iglesia”. La cuestión de la tutela del Patrimonio Monumental Eclesiástico la dejaba incluida en el contexto de los enfrentamientos institucionales entre el Estado y la Iglesia en los albores de la contemporaneidad: *Nada que tienda sus miradas por la vida política de los Estados Modernos, principalmente europeos, ha dudado que las relaciones de la Iglesia y el Estado es uno de los problemas que aún hoy apasionan a los pueblos y ocupa uno de los primeros lugares en el ánimo de los estadistas(...) España, que sabe muy bien el provecho que le ha seguido de la cordialidad de sus relaciones con la Iglesia Católica y las ha sentido más profundamente que otra nación, es también la que con más experiencia ha conocido los frutos derivados esa armonía coordinada con dos poderes y del mutuo reconocimiento de los derechos de ambas potestades, requisito indispensable de la estabilidad de sus referencias mutuas (...) Quien repase nuestra historia más reciente recogerá abundantes ejemplos de este espíritu mezquino que, a manera de eco, parecía sonar en la pasada campaña sobre el patrimonio artístico de nuestras iglesias. Que en esa polémica faltó el gran espíritu profundo y de altas miradas que distingue el pensamiento de las relaciones sinceras y cordiales entre la Iglesia y el Estado, deducirá sin esfuerzo quien desapasionadamente oiga el tono en que en varias ocasiones alcanzó la discusión. Consideraba que el hecho de que el Estado pudiera tutelar al Patrimonio Eclesiástico Monumental se podía considerar un instrumento de intervención en los destinos de la Iglesia: Si en el fondo parecía agitarse un problema serio (la conservación de nuestro tesoro artístico), han sido, con todo, tales insinuaciones que se han hecho contra los derechos de la Iglesia sobre el cuidado y vigilancia del tesoro artístico e histórico, que en sus manos está, sobre los pretendidos derechos de los fieles en la administración de los bienes*

*eclesiásticos, que más creería uno hallarse frente a una manifestación de aquel otro espíritu de oposición del cual nos hacíamos cargo hace poco (...), por lo que había que partir de la base que los bienes que formaban el Patrimonio Eclesiástico Monumental tenían un carácter de propiedad absoluta, por lo que el Estado no debía entrar en esta esfera: Que el patrimonio artístico de la Iglesia española es de la exclusiva competencia de la autoridad eclesiástica, es un principio que en una buena doctrina canónica no se puede desconocer ni olvidar. Decimos en buena doctrina canónica, porque, bajo pretexto de criterios que han podido prevalecer en recientes actuaciones de la autoridad del Estado, se ha insinuado como aceptable un concepto de la intervención del Estado en la propiedad exclusiva de la Iglesia, que no es compatible con lo que el Derecho Canónico afirma y establece. Nadie puede negar a la Iglesia en España el derecho a poseer bienes estables y permanentes. Los principios constitutivos de la Iglesia lo exigen imperiosamente, porque los bienes son una necesidad que impone el ser social y el fin que también la Iglesia debe alcanzar en provecho de sus asociados: he aquí un postulado que en nuestra patria no se puede disputar a la Iglesia. Sobre los títulos de derecho natural que como consecuencia del ser y existencias sociales conceden a toda asociación legítima la facultad de poseer bienes, ostenta la Iglesia en nuestra legislación el reconocimiento pleno de su constitución orgánica como fue fundada y como persevera en su ser orgánico y social. Como había ocurrido en el caso de las cartas pastorales, se fundamentaba ese pretendido derecho eclesiástico en los artículos concernientes del Concordato, especialmente el tan aclamado artículo 41: La Iglesia es exclusivamente competente para administrar los bienes eclesiásticos, sus propios bienes; es un derecho que reclama su naturaleza y su fin, pero, además, su constitución soberana. Si no bastaran los principios del Derecho canónico explícitamente expresado en el canon 1495, y ya antes definido en dos proposiciones del Syllabus de Pío IX, para comprender que asiste a las autoridades eclesiásticas un poder, al que no pueden lícitamente renunciar, podríamos aún recurrir al reconocimiento expreso que hacen las leyes españolas de la propiedad eclesiástica para poder excluir terminantemente toda injerencia de autoridades extrañas que ceda en detrimento de la jurisdicción eclesiástica. “La Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que posee ahora será solemnemente respetada” (art.41 del Concordato).*

En base a ello, Bigador sostendría que la Iglesia podría ejercitar su tutela exclusiva de los bienes de interés histórico y artístico que formara parte de su dominio, más aun cuando tienen una significación plenamente espiritual: *Sobre todos los bienes eclesiásticos de la Iglesia ejercita su derecho exclusivo, y nótese que ningún documento canónico ni civil hace distinción alguna entre bienes artísticos y no artísticos. Es un mérito insuperable de la Iglesia y de su civilización haber dado vida a tantos prodigios de belleza. La Iglesia necesita templos donde desarrollar el culto y los hizo espléndidos documentos, poemas de piedra de elaboradísimo arte; la Iglesia necesitaba objetos de cultos y los adquirió entre los más rico y valiosos e inspiró las formas más primorosas. Es un patrimonio que ha llegado a las generaciones actuales porque la Iglesia se preocupó de su conservación en todos los tiempos, mucho antes que los Estados modernos se acordaran de dar las leyes protectoras del patrimonio artístico. Y no deja de tener su miaja de filosofía, que*

*nunca hubo peligro de que las obras de arte religioso salieran de los confines de la patria que dio los artífices y la riqueza, salvo caso de violencias en las guerras, y aun entonces son proverbiales los ardidés usados, con escaso resultado a veces, para salvar la riqueza artística atesoradas en nuestras iglesias, hasta que la Iglesia se vio despojada inicuamente de los medios indispensables para su existencia<sup>2933</sup>(...). De ahí que criticara la Exposición de Motivos del R.D. del 9 de enero de 1923, al dejar en entredicho el carácter absoluto de la propiedad eclesiástica del Patrimonio Monumental Eclesiástico: No es cierto, pues, como puede verse, que esas medidas restrictivas sean nuevas en la Iglesia, mandadas por el Código de derecho canónico de 1917, como parece indicar la ampulosa y muy poca exacta exposición de motivos del R.D. del 9 de enero de 1923 refrendado por el Sr. Conde de Romanones. Se reconoce allí, como no podía menos, el derecho de la propiedad de la Iglesia sobre todos los muebles e inmuebles artísticos o no artísticos, aunque el R.D. se refiera especialmente a las obras artísticas, históricas o arqueológicas de las iglesias, catedrales, parroquias, etc., que está dentro del patrimonio eclesiástico. Pero con este reconocimiento se mezcla una teoría, repetida por los insidiosos en la pasada campaña, que debe en absoluto rechazarse, por ser incompatible con la naturaleza de la propiedad eclesiástica. Solamente cuando se desconoce la jurisdicción eclesiástica y la naturaleza de la Iglesia, se puede hablar de una acción tutelar del Estado en la regulación de las manifestaciones de la vida nacional religiosa (...). Incluiría una concepción de la propiedad de la Iglesia de carácter social, independiente a la propiedad privada de inspiración liberal, pero ajena a una intervención estatal: La propiedad eclesiástica es eminentemente social, sí, pero ordenada a la sociedad religiosa, en otro plano distinto de la propiedad privada. Es verdad que los bienes eclesiásticos están atribuidos en propiedad a cada una de las personas morales eclesiásticas que los hayan legítimamente adquirido, pero es siempre bajo la autoridad suprema de la Sede Apostólica, como dice el canon eclesiástico (...) en la Iglesia no hay propiedad privada, no poseen los individuos poseen las entidades morales; aquéllos administran los bienes conforme a las normas estrechísimas que les impone el Derecho canónico y con el destino y fin que les marca la misma Iglesia (...), por lo que era incompatible con la propiedad eclesiástica, incluido la artística de hablar de función social de la propiedad, tratándose de la propiedad eclesiástica, aún artística, como lo hace la exposición de motivos del R.D. del Conde de Romanones y lo han repetido los periódicos liberales, aplicando un concepto dudosamente legítimo que estará bien cuando se trate de la propiedad privada, es un contrasentido que pugna con la naturaleza de la propiedad eclesiástica (...). Acababa el artículo defendiendo el papel que la Iglesia había tenido en la divulgación cultural de la sociedad, e incluso en la propia conservación de los mismos: En la legislación canónica se habla particularmente de los bienes artísticos. La Iglesia no se ha olvidado que, aun no siendo su fin inmediato el fin cultural, ha contribuido como ninguna otra institución a promover y crear la cultura por excelencia cristiana, y que una de sus más espléndidas manifestaciones es el arte cristiano. Por la misma naturaleza, la Iglesia es sensible a la producción artística (...), así como la amplia producción de normativas que desde las autoridades eclesiásticas se habían promulgados en el seno de la Iglesia para impedir la*

---

<sup>2933</sup> La Circular a la que se refiere es del 15 de abril de 1923.



destrucción de sus bienes de interés histórico y artístico, como había sido el caso de la circular que el 21 de julio de 1914 dirigió Mons. Ragonesi a los mismos Sres. Obispos está prescrito en la norma 3º que “si para remediar necesidades perentorias fuera preciso vender o conmutar algunos de esos objetos, la venta o conmutación no podrá efectuarse sino con el previo permiso escrito de la competente autoridad eclesiástica, la cual no la dará sin plena garantía de que no han de ser exportados a territorios extranjeros”<sup>2934</sup>.

## **8. Los límites del derecho privado del Patrimonio Monumental en el ámbito de la intervención administrativa.**

### **8.1. Una singular protección del Patrimonio Arqueológico: La aplicación de la Ley de 1911 y el Reglamento de 1912 en el periodo del Directorio Militar.**

Con motivo de la Exposición de Arte Antiguo que, bajo la denominación de Arte en España, y con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, tendría lugar en dicha capital el IV Congreso Internacional de Arqueología, promulgándose para la organización del evento la **Real Orden de 29 de diciembre de 1928**, donde se dispondría los temas a tratar como eran los relativos a Arqueología Histórica y Protohistórica, Arqueología Oriental, Arqueología de la Antigüedad española, entre otras (art.1), creándose un Comité encargado de la organización y dirección del Congreso que estaría constituido por el Marqués de Foronda, como Presidente Honorario, Director de la Exposición Internacional de Barcelona; Presidente efectivo, el Duque de Berwick y de Alba, Director de la Real Academia de la Historia, los Vicepresidentes, José Ramón Mélida, Director del Museo Arqueológico Nacional, y Manuel Gómez Moreno, Catedrático de la Universidad Central y Académico de la Real de la Historia, y como Vocales, Hugo Obermaier, Francisco Alvarez Osorio, Jefe de la Sección Primera del Museo Arqueológico Nacional y Secretario de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Cabe destacar que al final sería presidido el Congreso por Mélida, en sustitución del Duque de Alba, siendo Bosch Gimpera su secretario. Durante el periodo del Directorio Militar se va a dar un paso crucial en el ámbito de la tutela del Patrimonio Arqueológico, no solamente por el incremento de excavaciones arqueológicas de carácter científico, promovidas tanto por las Corporaciones Públicas como Privadas, sino por el intervencionismo tutelar que se va a dar por el Estado en virtud de la aplicación de los preceptos que la Ley de 7 de julio de 1911 y el Reglamento de marzo de 1912 en la que el Estado despliega un verdadero papel tutelar. La Junta de Excavaciones y Antigüedades seguirá siendo el órgano administrativo primordial a la hora de autorizar las concesiones administrativas de excavaciones arqueológicas, tanto pública como privada. Asistimos en este periodo a un incremento de concesiones administrativas de autorizaciones de excavaciones arqueológicas.

---

<sup>2934</sup> BIGADOR,

Siguiendo las disposiciones que aparecen reflejadas en la Gaceta de Madrid las autorizaciones que se van a producir en estos años quedan recogido en el siguiente cuadro.

Regulación Normativa	Corporaciones Públicas, Privadas y particulares autorizados	Asentamiento donde se autoriza la excavación arqueológica	Obligaciones contraídas por el particular o Corporación Pública y privada	Régimen patrimonial del dominio donde se efectuará las excavaciones
Real orden de 24 de marzo de 1924	P.Mde Artifiano y Galdácano, Ingeniero Industrial y Profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales	El Carpio de Tajo, partido de Torrijos (Toledo)	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Dominio Privado
Real orden de 24 de marzo de 1924	Nicomedes Martín Mateos, publicista y Director de la revista Patrias y Letras y el Templario	Santa Cruz de la Sierra (Cáceres)	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 26 de junio de 1924	Pablo Guillén y Guillén, vecino de Sepúlveda	Sitio denominado “Los Mercados”, término municipal de Duratón (Segovia)	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 13 de agosto de 1924	Pedro Bosch y Gimpera, Catedrático de la Universidad de Barcelona y Director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Instituto de Estudios Catalanes,	Callosa de Segura (Alicante),	los artículos 7º de la ley de 7 de julio de 1911 y 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 11 de agosto de 1924	Luis Picó y Cañeque	Huelves, provincia de Cuenca	artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del	Dominio Privado

Regulación Normativa	Corporaciones Públicas, Privadas y particulares autorizados	Asentamiento donde se autoriza la excavación arqueológica	Obligaciones contraídas por el particular o Corporación Pública y privada	Régimen patrimonial del dominio donde se efectuará las excavaciones
			Reglamento de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 6 de agosto de 1924	Conde de Bellock, Presidente de la Junta de Museos de Barcelona	Ampurias	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 20 de noviembre de 1924	Claudio Martín del Río y Cruz	“Vega de Santa María”, Mesegaz (Toledo).	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 6 de diciembre de 1924	Mariano Pano y Pedro Carrillo, Presidente y socio correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza	la Vía romana que unió las poblaciones de Tarraco con Cesaraugusta	los artículos 7º y 8º de la ley de 7 de julio de 1911 y los 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Dominio Privado
Real orden de 27 de noviembre de 1924	Salvador López Sanjusto	“Cerro del Moro”, en término de Yunquera (Málaga)	los artículos 7º y 8º de la ley de 7 de julio de 1911 y los 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 25 de marzo de 1925	Vicente Ramírez y Suarez, Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia	La finca de D. Domingo Vallejo, Veger de la Frontera (Cádiz)	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Dominio privado

Regulación Normativa	Corporaciones Públicas, Privadas y particulares autorizados	Asentamiento donde se autoriza la excavación arqueológica	Obligaciones contraídas por el particular o Corporación Pública y privada	Régimen patrimonial del dominio donde se efectuará las excavaciones
Real orden de 7 de abril de 1925	Jorge Bonsor y Saint Martín	Setefilla, cerca de Lora del Río (Sevilla)	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Dominio Privado
Real orden de 7 de abril de 1925	Ernesto Botella Candela	Mola Alta (Alicante)	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Propiedad estatal
Real orden de 7 de abril de 1925	Benigno Vega Inclán, Vocal de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y Comisario Regio de Turismo	Tres sitios de la provincia de Cádiz	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 13, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 7 de abril de 1925	Laurentino Espinosa Valladares y Don Antonio Losada y Diéguez	la finca denominada Montealegre, de la parroquia de San Pedro de Domayo, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra),	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 13, 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 13 de mayo de 1925	Fernando Ponsell Cortés, vecino de Alcoy y Director del Centro de Cultura Valenciana	“Masos de Miró” y “Menente”, Alcoy	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Dominio Privado
- Real orden de 8 de mayo de 1925	Leopoldo Centeno y Jiménez-Peña	Castillo de Burgos	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 y 15 del Reglamento	Dominio Privado

Regulación Normativa	Corporaciones Públicas, Privadas y particulares autorizados	Asentamiento donde se autoriza la excavación arqueológica	Obligaciones contraídas por el particular o Corporación Pública y privada	Régimen patrimonial del dominio donde se efectuará las excavaciones
			de 1º de marzo de 1912	
Real orden de 15 de abril de 1926	Francisca Carretero Arranz	la ermita de la Vega, titulado De la Vega, en el término municipal Piedrahita (Avila)	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911, 14, 15 y 33 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Dominio Privado
Real orden de 9 de abril de 1926	el Estado	Archena (Murcia)	el artículo 4º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 8º del Reglamento de 1º de marzo de 1912, la reserva de derechos solicitada.	Dominio Privado
Real orden de 9 de abril de 1926	<i>Benito Guitart Trulls, Arquitecto, y D. Félix de Gregorio y Hernández-Mozo, Abogado,</i>	<i>el Valle de Cornejas, del término municipal de Piedrahita (Avila)</i>	Los artículos 7, 14 y 33 del Reglamento	Dominio Privado
Real orden de 10 de septiembre de 1926	Antonio Cristino Floriano Cumbreño, Delegado regio de Bellas Artes de la provincia de Teruel	Teruel	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y los 13 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912,	Público.
Real orden de 23 de mayo de 1927	José María Campoy García, Presidente de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Toledo	Circo romano de Toledo	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Público



Regulación Normativa	Corporaciones Públicas, Privadas y particulares autorizados	Asentamiento donde se autoriza la excavación arqueológica	Obligaciones contraídas por el particular o Corporación Pública y privada	Régimen patrimonial del dominio donde se efectuará las excavaciones
Real orden de 8 de septiembre de 1927	la Comisión de Monumentos de Soria	Las Cuevas (Soria)	el artículo 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y el 13 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Público
Real orden de 7 de septiembre de 1927	Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrid	Provincia de Madrid	los artículos 7º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Dominio Privado
Real Orden de 16 de enero de 1930	José Guardiola Ortíz, Presidente de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Alicante,	la Isla de Partichol (Alicante)	los artículos 7º y 8º de la Ley, de 7 de julio de 1911 y los 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Público
Real Orden de 16 de enero de 1930	Ramón de Carranza y Fernández Reguera, Presidente del Ayuntamiento de Cádiz	La Isla de Santi Petri	los artículos 7º y 8º de la Ley, de 7 de julio de 1911 y los 14 y 15 del Reglamento de 1º de marzo de 1912	Dominio Privado

Como podemos comprobar en el cuadro serían autorizados tanto particulares, Corporaciones Públicas e incluso arqueólogos extranjeros. Las obligaciones que aparecen recogidas en las concesiones se repetirían con la misma fórmula utilizada en la etapa anterior, como podemos comprobar en la lectura de la **Real orden de 20 de noviembre de 1924**, por el que el solicitante se obligaba al cumplimiento de las prescripciones de la Ley y Reglamento de Excavaciones, especialmente en lo que se refiere a la inspección del Estado, a practicarla científicamente, y a entregar a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, en el mes de enero de cada año, una Memoria en la que hará

constar los trabajos realizados y descubrimientos hallados, e inventariará dichos objetos, que no podrá ocultarlos o hurtarlos sistemáticamente al estudio, ni enajenarlos libremente, ni exportarlos. Las Corporaciones Municipales serían autorizadas, incluso en la figura del alcalde-Presidente, como así ocurrió en las excavaciones arqueológicas de Santi Petri, siendo autorizado el Presidente del Ayuntamiento de Cádiz, el cual podrá delegar la dirección de las expresadas excavaciones en otra persona de reconocida competencia, comprometiéndose que los objetos que se encuentren, en las referidas excavaciones, los entregarán, con las debidas formalidades, para su custodia, conservación y exposición, al Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, donde figurarán en depósito, como propiedad del excelentísimo Ayuntamiento de dicha ciudad. Las autorizaciones a investigadores extranjeros se siguen produciendo en este periodo como podemos comprobar en la **Real orden de 7 de junio de 1927** por el que se autoriza al Profesor de Arqueología en la Universidad de Eslanger (Alemania), relativa a excavaciones en el Campamento romano de Cáceres. En caso de que el Estado se hiciese cargo de la excavación, se nombraría un Delegado Regio, como podemos encontrar en el caso de la **Real Orden de 26 de noviembre de 1927**, en las excavaciones del atrio de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Bóveda, término municipal de Lugo, nombrándose en este caso Delegado Director, concediéndose una suma para atender a los gastos que ocasionen dichas excavaciones, librándose con cargo en los presupuestos del Estado del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

En algunas ocasiones las autorizaciones podían quedar declaradas sin efecto como ocurrió en la **Real orden de 15 de abril de 1926** declarando sin efecto la Real Orden de 17 de diciembre de 1923, por la que se autorizó a Don Pedro Bosch y Guimpera para practicar excavaciones arqueológicas en la ciudad de Tarragona. Las causas de dicha disposición aparecen reflejadas en la Exposición de Motivo, especialmente en el informe de la Junta superior de Excavaciones y Antigüedades, manifestando *que el concesionario Sr. Bosch, en la representación que ostenta no ha practicado los trabajos de excavaciones solicitados ni ha presentado la Memoria que con arreglo a los preceptos legales y a lo dispuesto en la citada Real Orden está obligado a presentar en el mes de enero de cada año, por lo que en realidad están en suspenso las indicadas excavaciones hace más de doce meses, lo que indica, a juicio de la Junta, que el interesado renuncia a proseguirlas y que, entendiendo que éstas son de gran interés para la arqueología cristiana, deben practicarse por el Estado, una vez anulada la autorización que se concedió*, al mismo tiempo que en el artículo 24 del Reglamento de 1º de marzo de 1912 se determina que los particulares que suspendiesen sus trabajos por más de doce meses, sin causa estimada por la Junta superior de Excavaciones, se entenderá que renuncian a proseguirlas, por lo que se declaraba sin efecto la Real orden de 17 de diciembre de 1923, por la que se autorizó a D. Pedro Bosch y

Guimpera, como Director del Servicio de Investigaciones arqueológicas del Instituto de Estudios Catalanes, de Barcelona, la práctica de excavaciones arqueológicas en la ciudad de Tarragona (art.1º), reservándose por consiguiente el propio Estado a practicar dichas excavaciones con arreglo a los artículos 4º y 8º de la Ley y 24 del Reglamento (2º), inscribiéndose en el Registro que lleva la Junta Superior de Excavaciones, a fin de acreditar dicho derecho por parte del Estado (3º). Una vez hecha la concesión a favor del Estado de las mentadas excavaciones en la ciudad de Tarragona, quedaría sujetos a responsabilidad, indemnización y pérdida de las antigüedades descubiertas los que practiquen excavaciones en las zonas indicadas, según preceptúan los artículos 10 y 22 de la Ley y Reglamentos citados (4º), proponiendo en momento oportuno la Junta Superior de Excavaciones al Ministerio el Delegado-director de las excavaciones y la suma que deberá concederse para practicar los trabajos (5º).

Las inspecciones de excavaciones arqueológicas se seguirían realizando, teniendo en cuenta lo que preceptúa el artículo 7º de la Ley de 7 de julio de 1911, y 11, 31, núm.3 y 40 del Reglamento de 1º de marzo de 1912, para la que se promulgó una amplia normativa, como la **Real orden de 27 de octubre de 1924** designando a la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia de Cáceres, para que inspeccione las excavaciones arqueológicas que en la Sierra de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres) realiza D. Nicomedes Martín Mateos. Cabe mencionar la Real orden de 20 de diciembre de 1924 por el que se establece la inspección de las obras para la construcción de un hotel que se van a realizar el sitio donde hoy se emplaza Lucentum para vigilar que no se pierdan los supuestos objetos arqueológicos que pudieran aparecer, siguiendo los artículos 7º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 14 del Reglamento de 1º de marzo de 1912, por lo que sería nombrado Delegado-Inspector de las excavaciones al Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Alicante, don Miguel de Elizaicín. Se especificaba que el Delegado Inspector deberá tener presente especialmente lo que dispone los artículos 3º, párrafo 2º, 5º y 10º de la citada Ley de Excavaciones y los 3º, 4º, 5º y 22 del Reglamento para su aplicación (art.2), por lo que los objetos que aparecieran se harían cargo de ellas la referida Comisión de Monumentos, *sin perjuicio del ulterior destino que la Superioridad acuerde se dé a aquellas* (art.3).

Durante esta etapa seguirían realizándose excavaciones arqueológicas costeados por el Estado, como fueron en los casos de Medina Az-Zahara (Córdoba), en virtud de la Real orden de 14 de enero de 1925, disponiendo que se continúen las excavaciones arqueológicas que vienen efectuándose en la finca denominada Córdoba, la Vieja, donde se hallan las ruinas de Medina-Az-Zahara (Córdoba), y la Real orden de 7 de junio de 1927 declarando que el Estado se reserva el derecho de practicar excavaciones arqueológicas en el campamento romano de Cáceres, y designando a los señores que se indican

para realizar dichas excavaciones, de acuerdo con lo que dispondría los artículos 4º y 8º de la Ley de 7 de julio de 1911 y Reglamento de 1º de marzo de 1912 (1º), nombrándose como Delegados-Directores a Shulten, Académico correspondiente de la Real de la Historia, publicista y profesor de Arqueología de la Universidad de Earlangen (Alemania) y al Sr. Presidente de la Comisión de Monumentos de Cáceres o al individuo de su seno que ésta designe (art.2), entregando los objetos que se encuentren en dichas excavaciones, convenientemente inventariados, al Museo Provincial de Bellas Artes de Cáceres (art.4). En la suma concedida iría incluida los gastos de adquisición de terrenos, indemnizaciones por su ocupación temporal, dietas y demás gastos, entre ellos, los de locomoción dentro de la península (art.5). En los mismos términos aparece la *Real orden de 25 de abril de 1927 por el que se practique excavaciones arqueológicas a propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, costeados por el Estado, en el sitio conocido como Las Cogotas, municipal de Cardeñosa (Avila) y la Real orden de 26 de noviembre de 1927 por que se manifiesta que después del examen de la Memoria presentada por el Delegado-Director de las excavaciones en Sagunto, D. Manuel González Simancas, y en vista de los resultados obtenidos, procede se sigan practicando, costeadas por el Estado.*

Durante la etapa del Directorio Militar el Estado en virtud de la Ley de 1911 y el Reglamento de 1912 proseguirá adquiriendo terrenos particulares, para excavaciones arqueológicas por declaración de utilidad pública, fundamentados en su interés histórico y arqueológico, como podemos comprobar en la **Real orden de 8 de septiembre de 1926** disponiendo se incoe expediente de expropiación forzosa por utilidad pública de los terrenos pertinentes para proseguir las excavaciones arqueológicas que se están realizando en Medina-Az-Zahara (Córdoba), a fin de evitar las dificultades que se ofrezcan para continuar las excavaciones por no ser propietarios de ella el Estado y lo costoso que resulta la compra por péquelas parcelas, y de conformidad con la referida propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, como así aparece en la Exposición de Motivos, por lo que de conformidad con los artículos 4º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 8º y 9º del Reglamento de 1º de marzo de 1912, se incoaría el correspondiente expediente de expropiación forzosa por utilidad pública de los terrenos que se determinan en la conclusión primera de la Memoria redactada por la Comisión delegado-directora de las excavaciones que en Medina-Az-Zahara, en los terrenos comprendidos en la finca “Córdoba, la Vieja” (1º). Al mismo tiempo se especificaba que *por tratarse de excavaciones en las que el fin principal que se persigue es el descubrimiento de los monumentos que integran el palacio y ciudad de Medina-Az-Zahara, que una vez descubiertos han de ser conservados, como se hace con lo que ya es admirado por todos, se aplicará en el trámite de dicho expediente de expropiación forzosa por utilidad pública la Ley de 10 de enero de 1879, de conformidad con el informe emitido por el Consejo de Estado al no haber precepto*

*especial en la Ley de Excavaciones de 7 de julio de 1911 y haberse así declarado en Reales órdenes dictadas por este Ministerio en 30 de abril, 23 de mayo y 7 de octubre de 1914 sobre casos de ocupación y de adquisición por el Estado de terrenos que interesaban para excavaciones arqueológicas*(2º). En los mismos términos se promulgaría la **Real Orden de 8 de noviembre de 1926** declarando de utilidad pública una Acrópolis ibérica y otras ruinas descubiertas en el sitio denominado Cabeza de Alcalá, en la dehesa de los Pedriñales, término municipal de Azaila (Teruel), así como los terrenos que aquéllas ocupan, vista la petición que había elevado Juan Cabré y Aguiló, Delegado-Director de las excavaciones que estaban siendo costeadas por el Estado. Se notificaba que al haber sido insuficiente la declaración de Monumento Arquitectónico-artístico que se hizo por Real Orden de 28 de noviembre de 1924, se procediera por el Estado a la expropiación forzosa de todo el área que ocupa la precitada acrópolis, más una faja de terreno a su alrededor de unos 100 metros de anchura. Tanto la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, como la Asesoría Jurídica se mostraría de conformidad, al hacer aplicables las prescripciones de la Ley de 7 de julio de 1911 y reglamento de 1º de marzo de 1912, que en sus artículos 4º, 8º y 9º y la Ley de Expropiación Forzosa de 10 de enero y **Reglamento de 13 de junio de 1879** y a las **Reales órdenes de 30 de abril, 23 de mayo, 7 de octubre y 2 de diciembre de 1914, y 15 de abril de 1915**, respecto a casos diversos de ocupación temporal y compra por el Estado de terrenos precisos para practicar excavaciones arqueológicas (2º).

Cabe mencionar la **Real orden de 6 de julio de 1927** por el que se declaraban de utilidad pública y se adquirirían varios terrenos contiguos al Teatro y Anfiteatro romanos de la ciudad de Mérida, a petición de José Ramón Melida, Delegado-Director de las excavaciones de Mérida, *por el interés que para la historia y la arqueología patria tienen las excavaciones que se practican en Mérida, debidas a las cuales han sido descubiertos tan importantes monumentos de la antigüedad, como el Anfiteatro, el Teatro y la Basílica romano-cristiana, antigüedades emeritenses declaradas Monumentos Nacionales por Real Orden de 15 de diciembre de 1912, por la necesidad de continuarlas, a fin de conseguir nuevos descubrimientos, y por evitar que construcciones modernas próximas impidan la contemplación en toda su grandeza de aquellos monumentos, se declaren de utilidad pública los terrenos cuya ocupación es necesaria, que forman una finca rústica sita en la ciudad de Mérida.* El dueño de los terrenos, D. Carlos Pacheco, que durante algunos meses estuvo negociando la venta al Estado, no había aceptado el precio en que había convenido. Por esta razón, el Delegado-Regio de las mencionadas excavaciones, con fecha 20 de abril, se dirigió nuevamente a la Superioridad, *manteniendo la conveniencia y absoluta necesidad de la adquisición que produjo, describiendo los terrenos que deben ser adquiridos y acompañando un plano en el que se determinan éstos y el lugar en que pudiera levantarse el edificio destinado a Museo de las antigüedades emeritenses.* De esta manera, la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, *atenta al interés arqueológico e histórico que las excavaciones en Mérida se practican tiene, y con objeto de evitar próximas*



*construcciones, propuso a la Superioridad la declaración de utilidad pública de los terrenos cuya ocupación juzgaría necesaria para llegar a la expropiación forzosa de los mismos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Mérida, por conducto del Delegado-Director de las excavaciones mencionadas, se ofrecería contribuir a la construcción del Museo de las antigüedades emeritenses, bien adquiriendo el terreno para ello o bien costeando el inmueble. La Asesoría Jurídica del Ministerio, se mostró conforme con la propuesta de la Junta Superior de Excavaciones, manifestando que procedía acogerse al derecho que el artículo 4º de la Ley de 7 de julio de 1911 concede al Estado para adquirir, mediante expediente de utilidad pública, las propiedades particulares, resultándose la expropiación forzosa por la ley 10 de enero y Reglamento de 13 de junio de 1879, aplicable a excavaciones y antigüedades, según dictamen emitido por la Comisión permanente del Consejo de Estado y con arreglo al cual, se han dictado por este Ministerio diversas Reales Ordenes acerca de diferentes casos de compra por el Estado de terrenos necesarios para practicar excavaciones arqueológicas. Unos meses después sería promulgado la **Real orden de 19 de octubre de 1927** por el que se declaran de utilidad pública los terrenos extramuros de la ciudad de Mérida, lugar llamado de “Las Pontezuelas”, predio propiedad de D. Juan Bravo, para realizar excavaciones arqueológicas, precisándose el hecho de que Delegado-Director de las excavaciones de Mérida D. José Ramón Mélida, no pudo llevarse a cabo la compra por negarse el propietario de los terrenos a firmar la escritura de venta, no obstante haberse antes mostrado conforme con ella, por lo que se propuso la declaración de utilidad pública.*

Los hallazgos arqueológicos ocurridos casualmente seguirían siendo objeto de controversias en esta etapa. En la finca denominada Higuera del Pintado se va a encontrar causalmente en abril de 1923 seis objetos de oro, que fueron denominados con el término de Candelabros de Lebrija, que siguiendo el estudio de Almagro se trataba de unos thymateria de significación sagrada y de origen fenicio, aunque especificando que era serían obras españolas, fechadas hacia el siglo VI. a. C.<sup>2935</sup>. Se va a producir una interesante cuestión jurídica en torno al hallazgo fortuito ya que doña Concepción Jarana, en nombre de su hijo Andrés Barrera, acudió al Ministerio de Instrucción Pública manifestando que habían sido los verdaderos descubridores de los objetos, por lo que reclamaba la mitad del valor legal de los mismos, conforme a lo que preceptúan los artículos 5º y 6º del Reglamento de 1º de marzo de 1912. la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, después de sentar la conclusión de que los candeleros han sido descubiertos casualmente y que el caso se encuentra comprendido en las prescripciones del artículo 5º de la Ley de 7 de julio de 1911 y 5º y 6º del Reglamento de 1º de marzo de 1912, *dice que si por circunstancias especiales en relación con los presupuestos del Estado no le conviniera a éste abonar las 11.117 pesetas, más el cambio, importe de la indemnización, cabría que por tratarse de objetos iguales el Estado se hiciera cargo*

<sup>2935</sup> ALMAGRO BASCH, M. “Los Thymateria llamados Candelabros de Lebrija”, *Trabajos de Prehistoria*, XIII, 1964, pp.7-67; Perea, Alicia Armbruster, Alicia, Demortier, Guy, Montero, Ignacio, “Tecnología Atlántica para dioses mediterráneos. Los Candelabros de Oro tipo Lebrija” *Trabajos de Prehistoria*, 60, nº.1, 2003, pp.99-114.

*de la mitad de ellos, dejando a la otra mitad al descubridor o descubridores para que dispusiesen de ellos libremente. Por orden de 1º de septiembre de 1924 se acordó que la Junta de Excavaciones ampliase su informe en el sentido de determinar si los objetos encontrados merecerían o no el concepto de antigüedades y si se había de acudir a tasación académica además de la hecha por el Fiel Contraste, y que informase la Asesoría Jurídica a qué organismo o Autoridad debía confiarse la misión de esclarecer si era uno o varios los descubridores de los candeleros y si dentro de las disposiciones legales deben adoptar el procedimiento propuesto por la Junta de Excavaciones. La Junta reafirmó que se trataban de antigüedades, productos industriales pertenecientes a la Edad Antigua, probablemente del Arte Ibérico, y descubiertos casualmente en el subsuelo, por lo que entendía que no era precisa la tasación académica cuando los descubridores habían aceptado la tasación hecha por el Fiel Contraste. La Asesoría Jurídica informó que, entrañando la cuestión de precisar quién fue el descubridor del tesoro, a los efectos del párrafo segundo del artículo 351 del Código Civil, en relación con la Ley de 7 de julio de 1911 y el Reglamento de 1º de marzo de 1912, para su aplicación, la determinación de un derecho de carácter civil, materia ajena a la competencia de la Administración Pública, deberá ventilarse por los interesados ante los Tribunales de Justicia, cuyo fallo podrá servir de base para las anteriores relaciones que hayan de establecerse sobre indemnización, debiendo hasta entonces quedar en suspenso las diligencias administrativas, que deberán limitarse a notificar a los interesados la resolución que recaiga, y respecto al segundo extremo, que el procedimiento que propone la Junta de Excavaciones para pagar el que resulte descubridor de los candeleros, entregándoles la mitad de ellos y quedándose el Estado con la otra mitad, no se acomoda a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de 7 de julio de 1911, ya que si bien se declaran propiedad del Estado las antigüedades descubierta casualmente, es siempre mediante la indemnización de su valor total, que se reparte entre el descubridor y el dueño del terreno en su caso, coincidiendo con lo dispuesto en el Código Civil, según queda ya expresado. Sin duda lo más interesante del Informe de la Asesoría Jurídica radica en la forma especial que propone la Junta sugiere a dicha Asesoría una duda que no se atreve a resolver por sí misma, por su incompetencia en materia de Arte, y que consiste en determinar el alcance de la función que el Estado compete para la defensa del Patrimonio Artístico, porque si consiste sólo en formar un Museo Muestrario, bastará, evidentemente, con que figuren en el mismo tres de los siete candelabros encontrados en Lebrija; pero si su finalidad es más amplia, como parece indicar el espíritu de lo legislado sobre la materia, y debe recoger cuantos objetos encuentren y merezcan el calificativo de antigüedades, no se cumple, evidentemente esa finalidad, dejando tres candeleros en poder de los interesados, que es de presumir los venderían inmediatamente, ya por su valor oro, o para persona que los sacase del territorio nacional para enriquecer algún Museo, por lo que propone informe la Junta sobre la duda apuntada, por lo que se resolvería en la **Real orden de 23 de abril de 1925** que los interesados acudan ante los Tribunales ordinarios a dilucidar cuál de ellos tiene el carácter de descubridor de los candelabros encontrados en Lebrija, y mientras esa cuestión previa se resuelve que informe la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades sobre la duda apuntada por la Asesoría Jurídica, notificándose esta resolución a los interesados y quedando en suspenso las diligencias administrativas hasta que no se*

*modifique el fallo que ha de servir de base para las ulteriores relaciones que hayan de establecerse sobre indemnización.* Después de una serie de pleitos, en 1926 sería adquirido por el Museo Arqueológico Nacional. Otras disposiciones donde se resolvían hallazgos fortuitos por particulares digno de mención sería la **Real orden de 8 de junio de 1927** resolviendo sobre los derechos adheridos en un hallazgo fortuito del descubridor y del Estado, al descubrirse una escultura de figura de animal, en un molino aceitero, sito en la calle del Sepulcro, propiedad de D. José Morente González, en la ciudad de Porcuna (Jaén) o la **Real orden de 14 de agosto de 1929.**

No solo los particulares reclamarían la indemnización de los hallazgos casuales de bienes arqueológicos, sino que también lo harían algunas entidades privadas como la Fábrica de Tabaco de Tarragona, que al cimentar el pabellón de cigarros en construcción se *había descubierto una necrópolis romana-cristiana, con numerosos objetos de gran importancia arqueológica, cuidadosamente conservados y catalogados por el personal directivo de las obras*, por lo que sería promulgada la **Real orden de 5 de marzo de 1927** resolviendo expediente incoado expediente sobre hallazgo de objetos arqueológicos en los terrenos de la Fábrica de Tabacos de Tarragona. Se precisaba de que era un descubrimiento casual (1º), cuyos objetos eran de grandísimo valor histórico y arqueológico y de sumo interés para la historia literaria de los primeros siglos del cristianismo (2º), agradeciéndose la actitud de la propia Compañía Arrendataria de Tabacos y sus representantes en Tarragona, *no sólo al dirigir los trabajos, sino por el amor puesto al descubrirlos y conservarlos, con lo que ha logrado enriquecer el tesoro arqueológico de la Nación, y aumentar con una brillante página la historia tarraconense, a la que hay que añadir el desprendimiento de todos los que han intervenido en los hallazgos al renunciar a la indemnización legal que les corresponda como descubridores, por lo que se dan las gracias de Real Orden a la Compañía Arrendataria de Tarragona, al Ingeniero director de las obras de nueva fábrica de tabacos de dicha ciudad y a cuantos con su actuación han logrado que se conserven interesantísimos monumentos romano-cristianos, que les hace acreedores a unánimes plácemes por el interés y cultura que en esto han demostrado* (3º). En otros casos los hallazgos casuales se producían a la hora de levantar un hotel, como ocurrió en las obras que el Conde de Artaza realiza para edificar un hotel en el emplazamiento de la Alamirya y finca denominada “La Gorgoja”, se había encontrando una pila de mármol tallada, proponiendo la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades que fuese declarada propiedad del Estado, se indemnizase al descubridor y se nombrase la Comisión que había de valorar el monumento encontrado, por lo que se promulgaría la Real Orden de 27 de marzo de 1927 por *el que se dispondría las condiciones legales por el descubridor del hallazgo fortuita*, por lo que 1º) De acuerdo con lo que preceptúan los artículos 5º de la Ley de 7 de julio de 1911 y Reglamento de 1º de marzo de 1912, se declara ser propiedad del Estado la pila de mármol; 2º) El descubridor, con arreglo a lo que determinaba el artículo 5º, del apartado 2º de la citada Ley de 7 de julio y 6º del Reglamento de 1º de

marzo, percibiría, al hacer entrega del monumento descrito y como indemnización la mitad del importe de la tasación legal del mismo; 3º) Con arreglo al artículo 6º de la Ley y 10 y 11 del Reglamento citado, procedería encargar la valoración de una Comisión compuesta de tres señores académicos, uno de los cuales será designado por el descubridor; 4º) Siendo atribución de la Junta de Excavaciones y Antigüedades proponer los individuos de las Academias que deben contribuir en cada caso las Comisiones Valoradoras, conforme al artículo 31 del Reglamento de 1º de marzo de 1912, se acepta la que propone para tasar la pila de abluciones de la época del Califato hallada en las ruinas de Alamiriya (Córdoba) y en su virtud se nombra al Ilmo. Sr. Don Enrique Romero de Torres, Académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y Director del Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba, y a D. Vicente Orti Belmonte, Académico correspondiente de la de Bellas Artes de San Fernando, Profesor de la Escuela de Artes y Oficios y Secretario de la Comisión provincial de Monumentos de Córdoba y 5º) Que se pusiera en conocimiento del descubridor y depositario de la referida pila, propiedad del Estado, el derecho que tiene a designar, para que forme parte de la anterior Comisión tasadora, a unos de los Sres. Académicos, de la Historia o de la de Bellas Artes de San Fernando, o a uno de los Académicos Correspondientes con residencia en la ciudad de Córdoba, encargándose de dar tal conocimiento la Comisión Provincial de Monumentos de dicha ciudad, la cual determinará de un modo preciso previamente quien sea el descubridor que ha de percibir la mitad del importes de la tasación legal, comunicándolo a este Ministerio.

La adquisición de bienes arqueológicos por parte del Estado seguiría siendo también una práctica habitual, como ocurrió con el sarcófago de mármol blanco descubierto en Berja. Como así informaría la Junta de Excavaciones el Alcalde de Berja, Antonio Oliver, *estándose practicando excavaciones para extracción de tierras en la finca que en el paraje llamado Santa Muña de esta ciudad posee el vecino D. Gracián Villegas, había sido encontrado un sarcófago de mármol blanco de dos metros de longitud, al parecer de época antigua y en buen estado de conservación.* La Comisión de Monumentos de Almería se dirigió al Ministerio expresando que el sarcófago de que se trataba podía ser considerado romano-cristiano y que si las Reales Academias proponían su adquisición por el Estado *se resolviese favorablemente antes que tan interesante testimonio del arte antiguo vaya a parar al extranjero.* La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por su parte, propondría la adquisición por el Estado y su depósito en el Museo Arqueológico Nacional, al mismo tiempo que pasado el expediente a informe de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, propondría que se declarase ser propiedad del Estado, ser el descubridor D. Gracián Villegas y se nombrase la Comisión que había de valorar el objeto encontrado. En base a estos Informes, sería promulgado la Real Orden de 6 de febrero de 1926 por el que se dispondría que 1º )De conformidad con los

artículos 5º de la Ley de 7 de julio de 1911 y el Reglamento de 1º de marzo de 1912, fuese declarada propiedad del Estado el sarcófago de mármol blanco, que había sido hallado casualmente al extraer tierras en una finca sita en el paraje denominado Santa Muña, término municipal de Berja (Almería), propiedad del vecino de dicha villa D. Gracián Villegas; 2º) De acuerdo con lo que determina el artículo 5º apartado 2º de la Ley de 1911 y el 6º del Reglamento de 1912, al descubridor D. Gracián Villegas, recibiría al hacer entregas del sarcófago y como indemnización, la mitad del importe de la tasación legal del mismo; 3º) Con arreglo al artículo 6º de la Ley y 10 y 11 del Reglamento se procediera encargar la valoración a una Comisión compuesta de tres señores académicos, uno de los cuales será designado por el particular expropiado.

No cabe duda que se seguirían concediendo algunas asignaciones presupuestarias para continuar excavaciones arqueológicas bajo la dirección del propio Estado, como se puede comprobar con la promulgación de la Real Orden de 29 de 1928, por el que se le concedía la suma de 10.000 pesetas para continuar las excavaciones en Medina-Az-Zahara (Córdoba), que serían libradas en nombre del Presidente de la Comisión de Córdoba, contra la Delegación de Hacienda (art.1), y para continuar las excavaciones y conservación del monumento de arquitectura paleocristiana en Gabia la Grande (Granada), que se le concedería la suma de 2.200 pesetas, contra la Delegación de Hacienda de Granada (art.2), disponiéndose en ambos casos que debían de ser entregados los objetos bajo la custodia de la Comisión Provincial, *hasta tanto que por este Ministerio se determine donde han de ser definitivamente conservado*. En la Real orden de 25 de marzo de 1930 (Gaceta de Madrid, 93, 3 de abril de 1930, pp.78-80) podemos apreciar el incremento no solamente de la asignación presupuestaria sino el propio número de excavaciones arqueológicas, si se compara con los periodos anteriores, a lo que correspondería para las excavaciones arqueológicas de Mérida, de las que son delegados directores José Ramón Mérida y Maximiliano Macías, 18.000 pesetas; para continuar las excavaciones de Medina Azahara (Córdoba), dirigida por una Comisión, concediéndole 20.000 pesetas; 3º) para las excavaciones que se estaban efectuando cerca de la fábrica de tabacos de Tarragona, de la que era Delegado-Director, Juan Serra Vilaró, concediéndole la suma de 10.000 pesetas; 4º) Para las excavaciones arqueológicas de Alcaraz-Azaila, en Híjar (Teruel), encomendada su dirección a Juan Cabré, 7.000 pesetas; para las excavaciones arqueológicas en diversos despoblados de la provincia de Soria, de la que era delegado director Blas Taracena y Aguirre; 6º) Para continuar las excavaciones de la antigua Pollentia, en Alcudia (Palma de Mallorca), nombrándose Delegados Directores, Rafael María de Isasi y Juan Llabrés, concediéndoles la suma de 5.000 pesetas; 7º) para las excavaciones de Itálica, que es delegado director Andrés Parladé, conde de Aguiar, que sería concedido 10.000 pesetas; 8º) Para las excavaciones de Sagunto, siendo



Delegado Director Manuel González Simancas, que se le concedería 7.000 pesetas; 9º) Para las excavaciones extramuros de la ciudad de Cádiz e islote de Santi Petri, de la que es Delegado Director Pelayo Quintero, concediéndosele la suma de 3.000 pesetas; 10º) Para las excavaciones de los dólmenes de la provincia de Salamanca, que es delegado director el Padre Cesar Morán, al que se le concedería 1.000 pesetas; 11) Para las excavaciones arqueológicas en Elche, siendo nombrado Delegado Director, Cayetano Margelina Luna, al que se le concede 5.000 pesetas; 12) Para las excavaciones en el castro de Troña (Pias, Pontevedra), de la que era delegado director Luis Pericot y García, concede la suma de 1.000 pesetas; 13º) Para las exploraciones y excavaciones arqueológicas en el puerto de Bares (Galicia), siendo Delegado Director Federico Marifierin, que se le concedería 5.000 pesetas; 14º) Para las excavaciones de yacimientos arqueológicos de la provincia de Cádiz, nombrándose como Delegado Director a Antonio C. Floriano Cubreño, que se le asignaría 2.000 pesetas; 15º) Para las excavaciones arqueológicas del campamento romano en las cercanías de Cáceres, de la que es Delegado Director Shulten, que se le concede 2.000 pesetas; 16º) Para las excavaciones arqueológicas en las ruinas existentes en la Sierra de Córdoba, para la determinación de sus antiguos monasterios, cuyos delegados regios son Rafael Castejón, Martínez de Arizalo y Félix Hernández Jiménez, que se le concede la suma de 2.000 pesetas; 17º) Para las excavaciones en los cerros de los Castillejos (Sanchoja, Avila), nombrándose Delegado Director a Juan Cabré, concediéndole la suma de 7.000 pesetas; 18º) Para la práctica de exploraciones y excavaciones en Castros, Citánias y otras ruinas y yacimientos arqueológicos de Galicia, de las que es Delegado Director Cayetano Mergelina y Luna, al que se le concedería la suma de 5.000 pesetas; 19) Para las excavaciones en la Necrópolis visigoda de Simancas (Valladolid), de la que era delegado director Saturnino Rivera, concediéndosele la suma de 2.000 pesetas; 20º) Para las excavaciones de yacimientos arqueológicos en Caspes, nombrándose Delegado Director a Lorenzo Pérez Temprado, que se le concedería 2.000 pesetas. En total de suma otorgada sería 123.000 pesetas, con cargo al crédito que figuraban en los presupuestos del Estado (art.22). Como podemos comprobar todas las asignaciones presupuestarias iban solamente a financiar excavaciones arqueológicas a instancias del Estado, subrayándose que todos los bienes arqueológicos encontrados pasarían a formar parte del dominio público.

Como novedad institucional digna de mención en esta etapa cabe destacar sería la puesta en marcha de un verdadero programa de conservación de las Cuevas de Altamira. Desde que había sido descubierta a finales del siglo XIX por Santuola, la cueva había recibido un tratamiento tutelar especial, que se iría intensificando en la década de los años 20, especialmente por los trabajos que realizaría algunos significativos investigadores, como fueron las campañas arqueológica que realizó Obermaier, que despertaría la atención sobre la conservación eficiente de la propia cueva. En 1921 el propio Duque de

Alba crearía la Junta protectora de la cueva de Altamira, en sustitución de la Junta administrativa de la cueva de Altamira, que presentaría un proyecto para la conservación y reparación, siendo aprobado por **la Real orden de 2 de agosto de 1924**, en la que se dispondría<sup>1º</sup>) La aprobación del referido proyecto referido para la reparación y consolidación de las Cuevas de Altamira, por la que se expresaba el agradecimiento por haber costado los gastos correspondientes al mismo; 2º) Sería designado el Duque de Alba, como iniciador del proyecto y Vocal de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, para conocer en los diferentes detalles relacionados con la ejecución del mismo, a nombre y en representación de la citada Junta Superior y 3º) Sería constituido una Comisión encargada de entender en la parte científica y administrativa del proyecto, bajo la presidencia del mismo Sr. Duque de Alba y siendo Vocales de dicha Comisión aquellas personas que él mismo designara. Por la Real Orden de 13 de mayo de 1924 fueron remitidas al Ministerio de la Gobernación las copias de la certificación suscrita por el Alcalde-Presidente y Secretario del Ayuntamiento de Santillana del Mar (Santander) del acuerdo tomado por dicho Ayuntamiento acerca de la cesión de la mencionada Cueva y del acta de la sesión celebrada por el mismo en 1º de abril último, en las que constaba que se había dado cumplimiento a los números 3º y 5º del artículo 220 del Estatuto Municipal, para la aprobación si era procedente por parte del referido Departamento ministerial de las bases o condiciones acordadas. Unos meses después, sería promulgada la Real Orden de 26 de mayo de 1924, por el que se autorizaba al Ayuntamiento de Santillana del Mar para que pudiera llevar a efecto el convenio aprobado por aquella Corporación, en virtud del cual había de ceder temporalmente y por un periodo no superior a noventa y nueve años las facultades dominicales. La Comisión quedaría formada por un Presidente, el Excmo. Sr. Duque de Alba; un Vicepresidente, D. Alberto Corral, Ingeniero, autor del proyecto; Secretario, D. Miguel Artigas, representante de la Biblioteca Menéndez Pelayo, actuando como Vocales, Don Hugo Obermaier, Catedrático de Prehistoria de la Universidad Central y Director de las excavaciones; Don Gabriel María Pombo, Presidente del Ateneo de Santander; don Alfredo de la Escalera, Presidente de la Comisión provincial de Monumentos de Santander; D. Emilio Botín y S. Santaola, en representación del descubridor de la Cueva; Don Gonzalo Bringas, Delegado Regio de Bellas Artes de Santander; D. Antonio Quijano, Presidente de la Diputación Provincial de Santander, y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santillana, Cura Párroco y Juez Municipal de dicha villa, por el cargo que desempeñan. Una de las primeras medidas que sería realizada desde la Comisión fue la inauguración de un museo donde se expondrían las obras arqueológicas recuperadas. A partir de 1925 las Cuevas de Altamira pasarían a convertirse en uno de los centros más visitados de España.

## 8.2. Unas nuevas medidas de regulación del tráfico de obras de arte.

Siguiendo la tradición normativa española, la tutela pública de los bienes muebles de interés histórico y artístico va a tener como eje el régimen jurídico del tráfico de las obras de arte, que sin duda alguna con la promulgación de 1926 va a culminar todo un proceso iniciado desde el siglo XVIII con el objetivo de limitar en lo posible la enajenación de las obras de arte al extranjero por parte de su legítimo propietario. Un amplio articulado del Decreto-Ley de 1926 va a tratar precisamente sobre los bienes muebles y su regulación. En base a la promulgación del Decreto-Ley de 1926, se ampliaría la tutela con la inserción como delito de contrabando la venta irregular al extranjero de todo bien de interés histórico y artístico, al mismo tiempo que se regulaba la subasta pública como único acto formal legalizado de venta de este tipo de bienes.

### 8.2.1. Las aportaciones de la Ley de 1926.

Sería con la promulgación del Decreto-Ley de 1926, a pesar del amplio número de disposiciones legislativas que se habían dado desde la etapa de los Borbones, cuando se va a delimitar una peculiar tutela del tráfico de bienes muebles de interés histórico y artístico. Una de las aportaciones más significativa sería el intento de aclaración conceptual referente al bien que se quería proteger, siendo denominado con el término de Riqueza Mueble, unida a la concepción jurídica de Exportación de Obras de Arte. Por riqueza artística, histórica o curiosa mobiliaria, sería definida en el artículo 24 todos los bienes muebles que debiera ser conservado para la Nación de acuerdo con las disposiciones del Decreto-Ley, a lo que se uniría el carácter móvil de los mismos, así todo aquello que pudiera ser transmitido de mano a mano, formando un todo determinado y concreto, haciendo alusión al carácter indiferente de quien fuera su propietario, por lo que abriría el camino a una mayor intervención estatal en la regulación del comercio de obra de arte, identificando su condición material en cuanto que correspondiera *a producciones de las Bellas Artes en sus diversos procedimientos y estilos*, así como todos los bienes que no estuviesen incluidos en la clasificación anterior y *fuera interesante conservar en bien del Tesoro Artístico Nacional y de cultura patria*. De esta manera, todo los objetos que presenten interés nacional por razones de arte o de historia no podrán ser exportados sin las autorizaciones correspondientes que dará el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, aunque nuevamente seleccionaría a los bienes en un fundamento cronológico, que en este caso serían todos los objetos y obras de pintura, decoración, dibujos, grabados, etc., de autores anteriores a 1830 (art.26). Todos los bienes muebles pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional tendrían la condición de **imprescriptibles e inalienables (art.27)**. En el artículo 28 se establecía la prohibición de la exportación fuera del Reino, autorizándose solamente únicamente las réplicas e imitaciones: *Se prohíbe la exportación de las obras cuyas salidas del Reino constituya grave daño y notorio perjuicio para la historia, la*

*arqueología y el arte por el interés y el valor histórico, arqueológico, artístico o documental que tuvieran. Podrán autorizarse únicamente la exportación de réplicas, imitaciones y copias, así como la de los objetos u obras de cualquier clase que sean, cuya exportación no pudiese causar el menor daño al Tesoro artístico-histórico, arqueológico y documental de España.* El papel de la Academia de Bellas Artes de San Fernando fue crucial en la elaboración del artículo 28, jugando un amplio papel el Duque de Alba y el propio Cambó<sup>2936</sup>. Se incluía como obligación de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales y en general toda administración o representante legal de entidad colectiva reconocida la confección de un Catálogo o relación detallada de las obras a que se refiere el artículo precedente, que tengan en su poder, expresando si son de su propiedad o si las tienen en depósito o pertenecen a conventos o particulares, que sería presentado al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes Artículo (art.25).

La intervención del Estado en el derecho de los propietarios sobre los bienes de carácter artístico y cultural que configuran el Tesoro se plasma en la obligación que tienen éstos de conseguir la autorización del Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, como así quedaba regulaba en el artículo 29: *El propietario o poseedor de las obras a que se refiere la última parte del artículo anterior, que desee exportarlas, dará previo conocimiento de su propósito al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, acompañando con la solicitud de exportación pretende una guía historial del objeto cuya exportación pretende (...).* Una Comisión de Valoración de Objetos Artísticos será la encargada de calificar si un objeto puede ser exportado: *La calificación de los objetos que se pretendan exportar se hará por las Comisiones de Valoración de objetos artísticos creada por el R.D. de 16 de febrero de 1922 (...).* Una vez dictado favorablemente la Comisión de Valoración, será el Ministerio de la Instrucción Pública la que se encargará de la autorización definitiva: *El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, una vez dado por el que pretenda exportar el conocimiento de que trata el artículo anterior, y con vista de la declaración de la Comisión de Valoración de objetos artísticos y las provinciales de Monumentos correspondientes y de la guía historial, concederá la oportuna autorización si juzga que la obra no es de aquellas cuya exportación se prohíbe a tenor de las prescripciones del párrafo 1º del artículo 28 de este Decreto Ley.* En el caso de que un propietario o poseedor de obras deseara exportarlas, tendría que informar al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, acompañando con la solicitud de exportación una guía historial de objetos cuya exportación pretenda (art.29.1). La calificación de los objetos que pretendiera exportar lo haría por la Comisión de Valoración de Objetos Artísticos creada por Real decreto de 16 de febrero de 1922, a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 29 de agosto del mismo año (art.29.2). El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, una vez oída la Comisión de

<sup>2936</sup> *Informe acerca de un Proyecto de Real Decreto que tiende a regular la exportación de obras de reconocido mérito artístico que puedan considerarse como parte integrante del Tesoro Artístico Nacional* Boletín de la Real Academia de San Fernando, T.XIX, 1925, pp.101-105.

Valoración de Objetos Artísticos y las Comisiones Provisionales de Monumentos correspondientes, podría conceder la autorización al emitir que dicho bien mueble no estaba incluida entre aquellas cuya exportación estaban prohibidas a tenor de las prescripciones del párrafo primero del artículo 28 de este Decreto Ley (art.30). Una de las innovaciones de este decreto sería el establecimiento de una tasa de derechos progresiva para los objetos cuya exportación se autorizase, con arreglo a las siguientes tarifas en concepto de licencias de exportación: hasta 10.000 pesetas, el 2 por 100; de 10.000 a 25.000, el 4; de 25.000 a 50.000, el 6; de 50.000 a 75.000, el 8; de 75.000 a 100.000, el 10; y más de 100.000, el 12 por ciento, y así subiendo en escala gradual hasta llegar a la tasa máxima de 20 por 100 del valor del objeto exportado (art.31.1). La aplicación de esta tarifa se determinaría en función del valor de la cosa u objeto que había de exportarse sobre la base del precio consignado en la guía de origen o declaración particular, contrastada con la tasación de las Comisiones de Valoraciones de objetos artísticos, si el objeto fuese imitación de fabricación del exportador o hubiera de exportarlo su primer poseedor, y si hubiera materia de transacción o de venta, por el precio contenido en la guía de origen, precio por el cual podrá hacerlo suyo el Estado, provincia o Municipio (art.31.2). Podría ser declarada nula las ventas del propietario privado por infracción de las disposiciones del Decreto-Ley, por lo que el Estado podía incautarse del bien e incluso del precio adquirido, llegando a incurrir el vendedor en delito penal por defraudación de la Hacienda (art.33), al igual modo que si se reconociese que la exportación de bienes muebles de interés histórico y artístico se hubiera hecho sin autorización del Gobierno o se hubiese comprobado dolo u ocultación en la confección de la guía de origen y exportación, el Estado procederá contra el poseedor, que será alzado por una suma igual al doble del valor del objeto, el cuál será confiscado en provecho del Estado (art.34.1), que en caso de reincidencia, sería castigado con arresto de diez o veinte días, además de la multa (art.34.2). Incluso podría llegar al delito de contrabando la exportación de las obras y objetos de antigüedad y de arte motivo de este Decreto Ley, cuando no sean presentados en las Aduanas respectiva o cuando se hubiesen presentado sin la correspondiente guía de origen, con declaración falsa o alterada(art.35), del mismo modo se incluirán los objetos de tal especie que se encuentren en el reconocimiento de los equipajes de los viajeros que carecieran de la documentación debida para que pueda salir del Reino (art.35), por lo que serían aprehendidos, aplicándose las disposiciones de la Ley de Defraudación y Contrabando (art.35).En un periodo de tres meses, el Gobierno, Provincia o Municipio podría adquirir el objeto cuya exportación se pretenda por el precio consignado en la guía de exportación y de origen, quedando durante este tiempo bajo la custodia del Gobierno en el lugar designado por la Comisión de Valoración y Exportación o las Autoridades provinciales de acuerdo con las Comisiones de Monumentos (art.34.1), siendo preferente dejarlos depositados en los Museos nacionales o provinciales, incluso pudiendo quedar en poder de sus propietarios o



poseedores *siempre que ofrezcan garantía suficiente o previa la oportuna fianza* (art.34.2). En caso de que se hubiese denegado la exportación del bien, quedaría inscrito en el Catálogo del Tesoro Artístico Mobiliario Español por un periodo de cinco años, a contar de la fecha de solicitud de exportación, periodo que podría ser renovado (art.34.2). En los Convenios Comerciales firmados por el Gobierno serían incluidos que los bienes muebles de interés histórico y artístico, incluyéndose expresamente los documentos, pudieran ser reintegrados o repatriados que hubieran sido vendidos en el extranjero sin la correspondiente autorización (art.36). En caso de que fueran devueltos, el vendedor-exportador debía reintegrar el importe al comprador, perdiendo el dominio del bien al pasar a ser propiedad del Estado, destinándolo al Museo que corresponda. En caso de que el vendedor-exportador no reintegrase al comprador el precio de la venta en el plazo de tres meses, lo hará el propio Estado y procedería contra el vendedor (art.36). A pesar de todas estas disposiciones sobre exportación de las obras de arte de propiedad privada, la realidad fue otra, como lo prueba que en 1926, la Academia de San Fernando respaldó la petición de la viuda de Beruete de exportar dos cuadros atribuidos a Zurbarán y Velázquez, lo que suscitaría un amplio debate interno de la propia Academia<sup>2937</sup>.

### **8.2.2. El delito de contrabando en el ámbito de la tutela penal: La configuración del Patrimonio Monumental como bien de interés jurídico.**

Si con la promulgación de la Ley de 1926 se puede afirmar que se había configurado definitivamente el Patrimonio Monumental como un bien a tutelar jurídicamente por el Estado, con la entrada en vigor de la Ley de 14 de enero de 1929 sobre el contrabando y defraudación, al ser tipificado como delito, el Patrimonio Monumental se convertía en un bien de interés jurídico. Se entendía por contrabando la ilícita producción, circulación, comercio o tenencia de géneros o efectos estancados o prohibidos (art.2º), y se especificaba como delito de contrabando cuando se realizase cualquier transacción de géneros de ilícito comercio o de efectos estancados en los siguientes casos: la extracción del territorio español, por cualquier medio o forma, efectos de cualquier especie, cuya exportación estuviera prohibida por las Leyes, Reglamentos u Ordenes vigentes, incluso en los casos que la prohibición fuera; y también por la exportación de las obras y objetos de antigüedad y de arte a que se refiere el Real decreto de 9 de agosto de 1926, cuando no sean presentada en la Aduana respectiva, o cuando se presentasen sin la correspondiente guía de origen, con declaración falsa o alterada. En igual infracción incurrirán los viajeros por los objetos de tal especie que se encuentren en el reconocimiento de sus equipajes careciendo de la documentación debida para que pueda salir del Reino<sup>2938</sup>.

<sup>2937</sup> ALVAREZ LOPERA, J., 1987, P.35.

<sup>2938</sup> RENART GARCIA, Felipe *Aspectos sustantivos del delito de contrabandos de bienes culturales (I)*

### **8.2.3. Una nueva regulación de la exportación de bienes de interés histórico y artístico al final del régimen militar: la Real Orden de 28 de abril de 1930 y el Real Decreto de 2 de julio de 1930.**

Al final del régimen militar sería promulgada la **Real Orden de 28 de abril de 1930** por la que se regulaba la salida de obras de arte y objetos de valor artístico y arqueológico, para lo que se debía de habilitar todas las Aduanas del Reino con el fin de *evitar los perjuicios que a los exportadores de obras de arte y de objetos de valor artístico y arqueológico, de exportación autorizada, se irrogan por la limitación del número de Oficinas de Aduanas habilitadas para aquella operación, y recogiendo las indicaciones expuestas en este sentido por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes*, por lo que el propietario debía presentar una relación en la que constase el número de dichos objetos, y las fotografías de los mismos, siempre que estuviesen debidamente respaldados por la Comisión valoradora que autorice la exportación. Esta disposición sería completada con el **Real Decreto de 2 de julio de 1930** de enajenación de obras artísticas, históricas o arqueológicas. En la Exposición de Motivos ya se referiría al difícil equilibrio entre los intereses colectivos y particulares en la transacción de bienes de interés histórico y artístico, por lo que se establecía como fórmula equilibrada la celebración de una subasta: *Entre dichas medidas, ninguna más eficaz, y al mismo tiempo más respetuosa con los intereses encontrados de legítimo poseedor y de la colectividad, que la de imponer, como forma solemne de inexcusable cumplimiento para la enajenación de los objetos integrantes de aquel tesoro, la puja sobre un valor fijado por peritos entre los concurrentes, que puedan ser todos los españoles, cuya invitación asegura una real y efectiva publicidad. La pública subasta, al mismo tiempo que garantiza el más alto precio que puede obtener del mercado el poseedor que manifestó su voluntad de subordinar al disfrute del valor de la cosa el goce de su uso en cuanto se dispone a enajenarla, ofrece a la colectividad interesada en la conservación de su patrimonio cultural, el modo de que algunos de sus Institutos culturales adquiera, por su justo precio, obras que por su especial mérito o por otras circunstancias deben ingresar en el patrimonio privativo de la comunidad.* Se entendería como obras artísticas, históricas y arqueológicas los edificios, ruinas, yacimientos y monumentos prehistóricos o históricos, esculturas, pinturas, grabados, dibujos cerámica, vidrios, medallas, inscripciones, tapices, estolas, libros, códices, manuscritos, muebles, y, en general, todos los objetos que tengan interés de arte, historia o cultura (art.2). Se insertaba el correspondiente procedimiento concursal de bienes de interés histórico y artístico, por lo que la subasta se tendría que celebrar previa tasación de los peritos autorizados y escritura pública, en la que el Notario diera *fe de haberse observado todas las formalidades establecidas en las Leyes* (art.1), debiendo de ser pública, por lo que debía ser anunciada con treinta días, al menos, de antelación al señalado para el remate, en el Boletín oficial de la provincia, en dos periódicos de gran circulación de ésta y en uno de la localidad en donde radique la obra u objeto que se pretenda enajenar, si lo hubiere, o por pregón si en la localidad no se publica ningún periódico (art.3.1), incluso se podría exigir que por precepto legal hubiera de autorizarse la enajenación que se anuncie

además en la Gaceta de Madrid y en dos periódicos de gran circulación en España, cuando así lo aconsejase la extraordinaria importancia artística, histórica o arqueológica del objeto, o cuando su tasación o la puja, en su caso, excediera de 15.000 pesetas (art.3.2), pudiéndose darse el caso contrario, por lo que lo dichas Autoridades podrían reducir la publicidad a los periódicos de la localidad o al pregón si el valor de tasación o el de la venta no excediera de 500 pesetas (art.3.2). En el anuncio de la subasta debía describirse *con los mayores detalles posibles* los objetos que se pretendiesen enajenar, haciéndose constar su tasación pericial que ha de servir de tipo a la subasta, y el local y horas en que desde la fecha de aquél hasta el día del remate han de estar expuesto al público tales objetos y, a disposición de quien quiera consultarlos, los títulos, autorizaciones, actas, dictámenes periciales y académicos que las leyes exigen y, desde luego, el expediente incoado para la subasta (art.4), incluso esta documentación podría exhibirse por copia debidamente autorizada por la persona encargada de la enajenación (art.4), no siendo necesaria escritura pública para la enajenación de objetos cuya tasación sea inferior a 10.000 pesetas (art.5). En caso de que no se cumpliera las formalidades de la subasta en consonancia con las disposiciones legislativas enunciadas, se tendrían por inexistentes o no hechas (art.6º), por lo que el Estado adoptaría las medidas necesarias para incautarse del objeto mal enajenado y se lo entregaría a la entidad propietaria siempre que éste entregase al Estado el precio recibido y dé garantía de su custodia (art.6.2), por lo que en caso de no hacerlo, el Estado lo entregaría a su vez al Museo local o nacional que le correspondiera (art.6). Sin embargo, quedarían excluidas la aplicación de estas disposiciones a las personas naturales y las Compañías civiles, o mercantiles, de obras u objetos de la colectiva y exclusiva propiedad de sus socios, ni a aquellas en las que el adquirente fuese un Instituto de cultura pública, cualquiera que fuera el enajenante (art.7).

## **9. Las transformaciones estructurales de los Servicios Públicos de interés Cultural.**

### **9.1. La política centralizadora en la tutela del Patrimonio Documental.**

Al igual que había ocurrido con otros bienes del Patrimonio Monumental, aquellos que constituían el llamado Patrimonio Documental van a estar tutelados por una administración centralizada con la reconstitución de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Archivos por el **Real decreto de 20 de mayo de 1930**, precisando que entendería en los asuntos puramente técnicos, entre los que se encontraban la proposición del aumento de las colecciones de los Archivos, Bibliotecas y Museos, su adecuada conservación, su mejor aprovechamiento, su precisa catalogación, el servicio público de los fondos, su guarda y garantía y la evitación de las pérdidas y su persecución (art.2.1). La Junta Facultaría constaría del Director general de Bellas Artes, como Presidente; el Director de la Biblioteca Nacional, como Vicepresidente;

el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, como Vicepresidente; diez y ocho Vocales, designados de Real Orden, en la forma siguiente: Un Académico de Número de cada una de las Reales Academias Españolas, de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, sean o no miembros del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, ingresados por oposición, incluso los Directores del Archivo Histórico Nacional y del Museo Arqueológico Nacional. Cinco, al menos de ellos, serán del primer tercio del Escalafón (art.4.1), designándose al Secretario por Real Orden (art.4.2), siendo una obligación primordial que todos los individuos de la Junta habrán de tener su residencia en Madrid (art.4.3). La Junta facultativa se podría reunir en pleno o en secciones, en número de tres: de Archivos, de Bibliotecas y de Museos (art.5). A la reorganización de la Junta se uniría por el **Real decreto de 22 de julio de 1930** la reorganización del personal encargado del servicio facultativo de los Archivos, Bibliotecas y Museos, que constituiría el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, cuyo jefe sería el Director general de Bellas Artes (art.1). Se crearían al mismo tiempo los cargos de Inspectores especiales técnicos entre los que se encontraban los de Catalogación de Incunables; de Epigrafía latina; de Epigrafía árabe; de Diplomas de la Alta Edad Media; de Numismática, al que se añadiría un Inspector especial técnico de conservación y cuidado de papiros, pergaminos y papeles (art.19). Como en etapas anteriores, algunos archivos públicos provenientes de antiguos monasterios, de interés histórico, debido a su mal estado de conservación, fueron enviados al Archivo Histórico Nacional, como fue el caso de los fondos que constituyeron el Archivo del antiguo monasterio del Parral, que estaban depositados en el Instituto de Segunda Enseñanza de Segovia, por lo que estimando en su verdadero valor histórico la colección de documentos que lo integran, se dispuso por **Real orden de 16 de julio de 1930** que pasasen, para su conservación y custodia, al Histórico Nacional, por lo que el Jefe del Archivo de Hacienda de Segovia debía hacerse cargo de la documentación que constituyó el repetido Archivo, designando el Director del Histórico Nacional un funcionario de su plantilla que debiera trasladarse a Segovia para recibir los fondos del Archivo del antiguo Monasterio del Parral, y disponer lo que procediera para el traslado de aquellos a Madrid.

La prohibición de la salida al extranjero de todo documento de interés histórico o artístico sería persistiendo en esta etapa, aunque podemos citar como caso anecdótico la **Real Orden de 4 de marzo de 1927** por el que Gobierno autoriza que puedan salir fuera de España diez papiros documentales perteneciente al Patrimonio Monumental Nacional para que sean restaurados en el Vaticano. Los documentos en cuestión eran ocho papiros pontificios identificados por el Dr. Pedro Kehr, Director general de los Archivos prusianos, pertenecientes a los Cabildos catedrales de Gerona, Urgel y Vicho, de la provincia eclesiástica de Tarragona que se encontraban en un estado

deplorable de conservación por lo que el propio Nuncio se dirigió al Ministerio exponiendo la *apremiante necesidad de restaurarlos y se afirma la imposibilidad material de conseguirlo actualmente, a menos de efectuar esta delicadísima operación en la Clínica de Códices que existe en la Biblioteca Vaticana, por la persona, única hoy en el mundo, notoria y suficientemente especializada en esta clase de trabajos*, para lo que solicitaba que el Gobierno autorizase su salida temporal de España, al considerarse que los papiros pontificios constituían un tesoro documental *que no tienen par en el mundo, tanto por el número de piezas como por su rareza y antigüedad*. Como así aparece en la propia Exposición de Motivos a pesar de que era deber primordial de todo Gobierno *conservar y poner a salvo para lo futuro las riquezas nacionales, señaladamente aquellas que por su naturaleza no pueden ser reemplazadas y cuya pérdida o destrucción causaría un daño irreparable a las generaciones venideras y a los altos y universales intereses de la Historia, ante las cuales se haría reo de lesa cultura quien de otra manera procediese*, y que el Reglamento de Archivos y las disposiciones vigentes sobre salida del territorio nacional de documentos históricos y objetos artísticos *sólo lo prohibían en los casos de enajenación y aún de préstamo, o sea cuando la Nación ha de perder el dominio sobre dicha parte de su patrimonio, o ha interrumpido con peligro las pérdidas aun fortuita; pero no cuando la salida temporal es patentemente necesaria, para evitar su de otra forma inevitable destrucción*, se dispuso que 1º) Se autorizase el transporte desde España de los diez papiros, de los cuales dos pertenecían al Estado; Dos al Archivo Capitular de la Catedral de Gerona; el quinto, a la de Urgel, y los cinco restantes, al de la de Vich; concentrándose los de procedencia eclesiástica en el Archivo de igual clase de Barcelona o en el de la Corona de Aragón, a elección de los respectivos Cabildos propietarios y 2º) Sería responsable del embalaje, transporte y conservación de los documentos el Inspector primero del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios.

Una medida de protección sobre la identidad del propio documento fue la prohibición por **Real orden de 12 de agosto de 1927** de obtener copias y fotocopias en serie de documentos existentes en los Archivos y otros Establecimientos o Centros del Estado. La causa de dicha prohibición quedaba justificada en la propia Exposición de Motivos, bien a raíz de la invención de la fotocopia, *que permite, sin gran coste a diferencia de la fotografía, la reproducción de series enteras y, por lo tanto, la formación de un archivo en facsímil, y porque como en la fotocopia no existe placa alguna, la obligación de entregar un duplicado de cada fotocopia que se obtenga, es duplicar el gasto del trabajo, con riesgo de que un archivo sin local bastante para conservar los duplicados, no puedan conservarse, resultando, por lo tanto, inútil semejante duplicidad, y porque cuando se trata de obtener fotocopias de series largas debe bastar la entrega de una relación exacta de los documentos reproducidos o a reproducir y el compromiso del fotocopista de entregar un*



*ejemplar del libro o revista en que se utilice(...)* al mismo tiempo que *los modernos procedimientos de reproducción y copia en facsímil de documentos, permite el traslado a países extraños de series enteras del venerado y rico tesoro documental que guardan nuestros Archivos, con tanta facilidad y escaso coste que de no tener cortapisa, condicionando las pretensiones de los investigadores, en cada uno de aquellos países extranjeros podría hacerse la investigación del contenido de nuestros Archivos para desdoro u con daño del nuestro*, por lo que se convertía en una necesidad la interpretación rígida de los artículos pertinentes del Reglamento de Archivos, *a fin de evitar que pueda darse el caso de que, a título de investigaciones, se trate de trasplantar en facsímil el contenido enterio de nuestros Archivos a países extranjeros.* Ante este hecho solamente se permitiría la obtención de copias o fotocopias de un documento determinado o de parte del mismo, previa solicitud que a él se contraiga, en la que el peticionario habría de precisar la parte del documento, ya investigado, que tratara de fotocopiar, habiendo sido concedido por el Jefe del Establecimiento en que el documento estuviera custodiado, dando cuenta inmediata a la Superioridad (art.2), quedando por consiguiente prohibido en absoluto obtener copias y fotocopias en serie de documentos existentes en los Archivos o en cualquier otro Establecimientos o Centros del Estado (art.1), solo concediéndose en casos excepcionales y de Real orden (art.1). Los Jefes de los Archivos, Establecimientos o Centros del Estado serían los responsables de cumplir estos requisitos (art.3).

Al igual que se prohibía la reproducción, sería prohibido la eliminación o enajenación de cualquier documento que fuera considerado de interés histórico. Se dictaron durante este periodo una serie de disposiciones que completaría otros anteriores, donde se legislaba el concepto de papel inútil o inservible donde se precisaba entre sus caracteres carecer de interés histórico. En el Real decreto de 8 de septiembre de 1925, en el que se autorizaba al Tribunal Supremo de la Hacienda Pública la enajenación del papel inútil, sería declarado como tal a los efectos legales: 1º) Toda documentación cuyo vigor legal haya caducado; 2º) Los que no constituyan justificantes de cuentas; 3º) Los que puedan ser sustituidos por procedimientos legales y 4º) Todo documento que carezca de interés histórico. Por último, la Real orden de 10 de julio de 1925, que enumeraba, como documentación inútil: 1º) Los impresos o manuscritos que por su naturaleza fueran manifiestamente inservibles y no tuvieran ninguna aplicación como sobrantes de ediciones o publicaciones; 2º) Los documentos cuya fecha fuera anterior en treinta años a la en que se realice la clasificación, que carezcan en absoluto de interés histórico y no constituyan justificación de derechos que puedan ser alegados en lo futuro a favor del Estado o de los particulares y 3º) os duplicados o borradores de las cuentas generales del Estado (...). Finalmente, en el ámbito de la administración municipal sería promulgada la **Real orden de 30 de marzo de 1927** disponiendo que fuesen *enajenados o eliminados aquellos documentos*

*calificados como inútiles, conservándose solamente aquellos que tuvieran un interés histórico o artístico, entendiéndose como tales los impresos o manuscritos que por su naturaleza sean manifiestamente inservibles y no tengan ninguna aplicación, como sobrante de ediciones o publicaciones, impresos duplicados de libros y folletos y exceso de repuestos y de impresos que no hayan sido ni puedan ser utilizados y especialmente los documentos que carecieran en absoluto de interés histórico y no constituyesen justificación de derechos que puedan ser alegados en lo futuro a favor del Estado, de las Corporaciones provinciales y municipales, o de los particulares, por lo que continuarán custodiándose en los Archivos como fondos de los mismos, y los seleccionados como documentos de posible valor histórico o artístico se agruparían separadamente para ser trasladados a un local independiente. A tales efectos se practicaría una minuciosa selección, de todos los documentos que pudieran ser enajenados nombrándose una Junta compuesta del Presidente o Vicepresidente de la Diputación provincial, del Secretario, Interventor, Depositario y Archivero de la misma, asesorado por el Jefe de la Sección de Presupuestos Municipales o funcionario de la Corporación.*

## **9.2. El Estado adquiriente de obras de arte: Una nueva regulación de los museos públicos.**

Durante la etapa del Directorio Militar se siguieron estimulando los legados de particulares y Corporaciones Públicas a los Museos Públicos. La aceptación de las colecciones por parte de las instituciones era autorizada por el Ministerio de Instrucción Pública, a instancia de las Juntas de Patronatos de los diferentes museos. La donación podía ser de particulares, como la **Real orden de 16 de marzo de 1926** por la que se autorizaba a la Junta de Patronato del Museo Nacional del Prado que aceptase dos cuadros donado por D. Fernando de los Villares Amor, de patronos del propio Museo, como en el caso de la **Real orden de 25 de abril de 1927** por el que se acepta el legado de D. Luis de Errazu y Rubio de Tejada, Patrono del Museo. Un gran número de bienes habrían sido donados en legado testamentario, convirtiéndose en bienes públicos, reconociéndose en la propia disposición legislativa la actitud del donante, como en el caso de la Real Orden donde consta *ha tenido a bien disponer se den las gracias a don Manuel Irureta-Goyena y demás herederos del benemérito Sr. Don Luis de Errazu, que han dado cumplimiento al patriótico desprendimiento del testador, tan digno de ser imitado, publicándose en la Gaceta de Madrid con el objetivo de que se divulgue el noble proceder del donante y llegue al conocimiento del mayor número de personas su esplendidez y amor al Museo Nacional del Prado, acrecentando la riqueza artística del mismo, con lo que acrecienta también el tesoro artístico nacional.* Los propios artistas podían donar al Estado algunas de sus obras, que debían de ser aceptada a instancia de las Reales Academias, como podemos comprobar en la **Real Orden de 31 de mayo de 1929** disponiéndose que con destino al Museo de Arte Moderno, se hiciera cargo el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el cuadro titulado el desembarco de Alhucema, de José Moreno Carbonero.

La adquisición a través de compras de obras de arte y arqueológicas siguió siendo una práctica habitual por el Estado, por el que se seguía un rígido procedimiento administrativo en la que participaba un amplio número de organismos como podemos comprobar en la lectura de la **Real orden de 31 de octubre de 1924** por el que el Museo Arqueológico Nacional a D. Antonio Pons Olives unas series de objetos prerromanos, después de que había sido elaborando una serie de informes favorables emitidos por el Director del Museo Arqueológico Nacional, por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la Real Academia de la Historia. Cabe mencionar que la colección se hallaba depositada en el propio Museo, y fue adquirida por la cantidad de 10.000 pesetas, como precio fijado por el vendedor y en que ha sido tasado oficialmente; *y que se librarán, desde luego, a favor del repetido Don Antonio Pons Olives, con cargo de crédito de 50.000 pesetas consignados en el capítulo 18, artículo 2º, concepto 24 del presupuesto vigente de este Ministerio.* En los mismos términos nos encontraríamos la **Real orden de 22 de abril de 1927** por el que se adquiere un tejido árabe que estaba en depósito en el Museo Arqueológico Nacional, en base a la solicitud de D. Cándido A. González Palencia *ha solicitado de este Ministerio la adquisición de un tejido árabe de su propiedad, habiéndose informado favorablemente el Museo Arqueológico Nacional y la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, tasándolo en 10.000 pesetas, con cuyos informes han estado conforme, a su vez, la Real Academia de la Historia y la Real orden de 16 de diciembre de 1926* por el que se adquiere tres tallas moriscas toledanas para el Museo Arqueológico Nacional, cuyo dueño, D. Anastasio Páramo y Barranco lo había cedido en depósito al propio Museo.

En esta etapa se irían adquiriendo un gran número de archivos históricos, algunos pertenecientes a particulares, como podemos apreciar en la lectura de la **Real Orden de 14 de marzo de 1924** disponiendo que se adquiriera a Don Ramón Rubiños Queimadiños la colección de 20 documentos referentes al antiguo convento de Santo Domingo de Tuy, de los siglos XIII al XVI, en la cantidad de 1.500 pesetas. En los fundamentos de la adquisición que aparecen en la Exposición de Motivos se daba valor el hecho de formar una colección, *por referirse todos a un mismo Instituto o Casa religiosa, con datos importantes sobre su fundación y principales vicisitudes por que ha atravesado; siendo, desde este punto de vista, muy conveniente su adquisición por el Estado, con destino al Archivo Histórico Nacional, donde podrán ser incorporados a los cinco legajos allí existentes relativos al propio convento, conforme han informado el mencionado Archivo, la Junta facultativa del ramo y la Real Academia de la Historia.* La adquisición más importante de esta etapa fue sin duda alguna el Archivo y la Biblioteca del Ducado de Osuna, con la promulgación de la **Real Orden de 30 de noviembre de 1927**, uno de los más significativos de los conservados en España<sup>2939</sup>, que

---

<sup>2939</sup> CONTEL BAREA, C. "Fondos Nobiliarios en el Archivo Histórico Nacional", *Cuaderno de Historia Moderna*, 15, 1994, pp.397-443; AVILA SEOANE, Nicolás "Fuentes para el

había sido adquirido por los acreedores del propio Ducado a raíz de la sentencia de 1894, ofreciéndoselos los nuevos propietarios al Estado en condiciones muy favorables, por lo que en 1917 se depositaron en el Archivo Histórico Nacional, como así aparece recogido en la Exposición de Motivos: *Los tenedores de las denominadas obligaciones hipotecarias de la emisión concertada en 1881, entre el Banco de Castilla y la Casa y Estado de Osuna, a quienes desde enero de 1884 pertenecen por virtud de sentencia firme, los Archivos Ducales, importantísimos por su documentación de interés extraordinario para la historia de la Nación, constituyeron éstos en depósito en el Archivo Histórico Nacional. En el Informe de la Real Academia de la Historia se precisaba que se trataba de una masa considerable de documentación procedente de ocho grandes Estados señoriales de primer orden (refiérase a los Ducados de Arcos, Bejar, Benavente, Gandía, Infantado, Medina del Rioseco, etc.) y cincuenta y dos de menor categoría, reunidos todos en una denominación común, conteniendo documentos que arrancará en su generalidad desde el siglo XII, sin solución de continuidad en su desarrollo diplomático e histórico, hasta bien entrado el siglo XIX, y cuyo conjunto aproximadamente da una suma de toda índole que no baja de 300.000 piezas distintas, repartidas en 5.000 legajos. Y después de enumerar algunos de los más notables para que se vean su antigüedad y máxima importancia, añade: “Cada uno de los Archivos reunidos en la Casa de Osuna abunda en documentación de esta entidad durante el curso de toda nuestra Historia, así en los últimos siglos de los tiempos medios, como los que van transcurridos de la Edad Moderna, y gran parte de ella no sólo inédita, sino conteniendo informaciones que hasta aquí han sido desconocidas... Si el Estado dejase escapar estos fragmentos preciosos de la Historia patria para que se esparcieran por las colecciones de los particulares o las codicias de los extranjeros, como si se tratase de las ejecutorias de una familia extinguida o de una nacionalidad que ha desaparecido, incurriría en un delito de lesa patria, en los que ya es tiempo de que hasta por nuestro propio honor, por nuestro propio estímulo, por nuestras propias miras hacia un porvenir al que jamás podemos renunciar, esos pedazos del valor, del genio, y del alma de la Nación, en los que fue inmensa la labor de nuestros ilustres padres durante largos siglos, no vuelvan a salir del racio fecundo de nuestra vida nacional, ennoblecida por los cada día importantes estudios con que la Historia se engrandece”.* Un donante anónimo donaría la cantidad establecida para su adquisición: *Más ha tenido la fortuna de que un enamorado de nuestras pretéritas glorias, tan prócer por su nombre como por el uso que hace de su cuantísimo patrimonio, dona al Estado español la suma de 200.000 pesetas, que es la cantidad fijada por los actuales dueños de dicho tesoro histórico para su enajenación. De esta manera se dispondría que el Estado adquiriera de su actual poseedor los obligacionistas de Osuna, en precio alzado de 200.000 pesetas, los Archivos de dicha Casa Ducal, tal como se depositaron en el Archivo Histórico Nacional (1º), anotándose que el pago de la cantidad acordada había sido realizada por un donante anónimo, que el Estado acepta con satisfacción y gratitud, haciéndole público en homenaje al generoso donante y para estímulo de cuantos puedan*

---

estudio de los Señoríos Castellanos en los Archivos Españoles”, *Documenta&Instrumenta*, 4(2006), pp.8-9.

imitarlos (2º). El acto de sesión de los Archivos de Osuna y entrega de las 200.000 pesetas por el Ministerio de Instrucción Pública y la consiguiente cancelación del depósito tendría lugar mediante acta que suscribirá el *Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes o su Delegado D. Francisco Rodríguez Marín, Jefe Superior del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; D. Joaquín González Fernández, Jefe del Archivo Histórico Nacional; D. Xavier Cabello Lapiedra, Abogado del Estado, Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y el excelentísimo Sr. D. Jenaro Silva Campdell, Marqués de Almenara, en representación de los obligacionistas de Osuna* (3º). Unos años antes, había sido adquirida la antigua Biblioteca del Ducado, cuyo dictamen de adquisición había sido redactado por Don Marcelino Menéndez y Pelayo, que en aquel momento ostentaba el cargo de diputado por Palma de Mallorca, por lo que se había convertido en un bien público, al pasar a los fondos de la Biblioteca Nacional.

El anuncio de la venta de la Colección Vives movilizó a algunos eruditos, como fue el caso de Arturo Mélida, que en 1910 en la Revista de Archivos, Museos y Bibliotecas ya advertía de la importancia del legado: *Por todas estas razones cuando supe que el Sr. Vives, contra todo su deseo, se veía en el caso de enajenar su colección, me avisté con él y le indique la conveniencia de que antes de cerrar trato en el extranjero le ofreciera al Gobierno español (...) conocía lo exiguo de los presupuestos del Estado y los trámites dilatorios que inevitablemente siguen los negocios oficiales. Con todo, aceptó la indicación (...). Suscribió instancia ofreciendo las antedichas colecciones al Museo Nacional, y quedó moralmente obligado a aceptar, como luego aceptó, la tasación que de los objetos hiciese la autoridad oficial á ello llamada (...) Seguido el expediente con el mejor deseo y diligencia por parte de todos, comenzando por el Sr. Conde de Romanones, que a la sazón era Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el Museo Arqueológico Nacional emitió el oportuno informe, en el que se clasificaba la colección en cinco grupos: uno de bronce orientales y griegos; otro, de bronce ibéricos (figuras) e ibero-romano; otros, de fíbulas ibéricas, romanas y visigodas; otros, de bronce romanos, y otros, de joyas; sumando en total la tasación 120.315 pesetas. Esta cifra fue la dificultad que hizo estéril todos los buenos propósitos de cuantos nos interesamos en el asunto: la consignación que para adquisiciones de antigüedades figuran en los presupuestos del Estado es insuficiente en casos como éste. Dictó, sin embargo, el Ministro, una Real orden disponiendo la adquisición en firme del grupo de los objetos de plata en el precio de tasación (5.500 pesetas) y proponiendo el pago eventual del resto con cargo a ocho presupuestos futuros. No resolvía esto la cuestión planteada. El Sr. Vives elevó nueva instancia al Ministerio cuando se hallaba al frente de los negocios del mismo el Sr. Burrell, a quien no dejamos de hacer presente los que nos interesábamos en tal empeño la importancia de la colección y de la oportunidad de adquirirla. La realidad del presupuesto no consistió, sin duda, que el Ministro atendiera nuestras manifestaciones, y por nueva Real orden sólo pudo ordenar nuevamente la adquisición de los objetos de plata (...) los que apreciamos la conveniencia de que objetos de tan notoria rareza no salgan de España, no podemos resignarnos a ello sin intentarlo por un medio extraoficial (...) serán adquiridos por suscripción pública con destino al Museo Arqueológico Nacional (...). Dichos grupos*



*hállanse hoy expuestos, en calidad de depósito, en el Museo Arqueológico Nacional, y allí esperamos que ha de dejarlos sus dueños durante el plazo de suscripción para que pueda ser conocidos del público*<sup>2940</sup>. El propio Mélida ya se había referido en un artículo anterior de la colección de antigüedades que Antonio Vives había reunido: *Nuestro buen amigo D. Antonio Vives, recientemente elegido académico de número por la Real de la Historia, posee un espíritu coleccionador tan vivo y tan diligente, que en poco tiempo, en cosa de dos años, ha conseguido reunir un cierto número de bronce antiguos, por cuya importancia y mérito esperamos que los lectores estimarán nuestro deseo de dárselas a conocer, cosa más necesaria siempre respecto de las colecciones particulares que de las públicas. Algunos de ellos llegaron fácilmente a manos del colector, cual si estas tuvieran especial imán para las antigüedades; otros le han ocasionado viajes y malos ratos. Aquellos de los lectores (y serán casi todos) que se encuentren tocado de la pasión por las antigüedades, comprenderán fácilmente la exactitud de lo que decimos y lo laudable que es modo tan práctico de cultivar la ciencia. Tales aficiones son antiguas en D. Antonio Vives, y de ello dan cuanta en su morada pinturas, medallas, piedras grabadas, barro cocidos y diversidad de objetos; pero los bronce constituyen por sí una colección selecta, como formada por persona inteligente; colección única, por cierto, en España, si se considera que nuestros coleccionistas prefieren los objetos de la Edad Media y del Renacimiento, y que dan preferencia á la talla, á la cerámica y á la pintura sobre otro género de manifestaciones del arte y de las industrias de tiempos pasados*<sup>2941</sup>. El Museo Arqueológico no dispondría de fondos necesarios para adquirir la colección por lo que abriría una suscripción, que sería abierta por el propio Rey Alfonso XIII con 1000 pesetas, por lo que en 1912 se cerró la cuestión sin llegarse a obtener los fondos necesarios para poder adquirir la colección completa, por lo que solamente se pudo comprar la mitad, siendo vendida el otro lote al anticuario Meunier de París, donde Huntington la adquiere en nombre de la Hispanic Society<sup>2942</sup>. Después de unas series de vicisitudes se fueron adquiriendo un amplio número de bienes que habían pertenecidos a su legajo, en virtud de las Reales Ordenes número 1529, del año 1927 (Gaceta 15 de diciembre), y 578 del año 1928 (Gaceta, 11 de abril), dos lotes, por valor el primero, de 40.000 pesetas, y el segundo, de 30.000, y por el Patronato para la Defensa del Tesoro Artístico Nacional, en 5 de mayo del pasado año, un tercer lote, por valor también de 30.000 pesetas, de los en que, para su adquisición fue dividida, por su importancia, la colección de antigüedades descubierta en Ibiza por D. Antonio Vives, tasada en peseta 125.000, vendida al Estado por su viuda, doña Concepción Segura. En última disposición, la

<sup>2940</sup> MELIDA, José Ramón Los bronce ibéricos y visigodos de la Colección Vives. Medio de adquirirla para el Museo Arqueológico Nacional, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, pp.485-486. Tercera época, Año XV, Tomo XXIII, julio a diciembre de 1910. Madrid, 1911.

<sup>2941</sup> MELIDA, José Ramón La colección de bronce antiguos de D. Antonio Vives, en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tercera Época, Tomo IV, Madrid, 1900, pp.27-28.

<sup>2942</sup> CELESTINO PEREZ, Sebastián “El coleccionismo español de principios del siglo XX, Antonio Vives Escudero”, en *El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of America*, Fundación Cajal, Sevilla, mayo-junio, 2009, pp.100-104; MÉLIDA, J.R. “Adquisición de los bronce ibéricos y visigodos de la colección Vives para el Museo Arqueológico Nacional”, *Revistas de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tomo XXVIII, pp.453-455.

**Real orden de 27 de marzo de 1929** serían adquiridas 56 piezas escultóricas de barro de las antigüedades que habían sido descubiertas en Ibiza por el propio Vives.

Prácticamente ya al final del periodo de la dictadura militar se va a aceptar la adquisición por el Estado del legado Sorolla, una vez muerta la viuda del pintor, Doña Clotilde García del Castillo, viuda de Sorolla, el 5 de enero de 1929, con el fin de crear un Museo que perpetuase el nombre de su marido. Con este fin quedaría en poder los siguientes bienes: a) La casa hotel nombrada de Sorolla, con sus estudios y jardines, sita en el paseo del General Martínez Campos, núm.37, de esta Corte, en cuyo edificio precisamente, ha de establecerse el Museo; b) Los cuadros, dibujos y apuntes de que es autor su finado esposo, y los objetos artísticos colocados en la referida casa, que son de la exclusiva propiedad de la testadora, todo lo que deberá también destinarse al Museo ya citado, debiendo entenderse que tales objetos serán aquellos de que no hayan dispuesto en vida la testadora, pues ésta se reserva el derecho de hacerlo libremente, así como el de destinar parte de ellos a otro Museo, repartirlos entre los de España y fuera de España, o donar una cantidad de ellos a la ciudad de Valencia, eligiendo a tales efectos los que la otorgante estime oportuno (Se excluyen expresamente de este legado los retratos de sus hijos, que son de la respectiva propiedad de éstos, y los de grupo de familia, autorretratos de su marido y retratos de la testadora, que son de propiedad de la misma testadora); c) La cantidad necesaria como capital para producir una renta de veinte mil pesetas anuales, invirtiéndose aquella en papel del Estado, y destinándose dicha renta a la conservación, custodia y reparación del Museo y de las obras de arte que se han mencionado anteriormente. Al mismo tiempo la testadora establecería una serie de condiciones, que reproducimos literalmente:

1º Si el Estado destinase el hotel, sus estudios y jardines u otro objeto que no sea el expresado Museo y exposición de las obras auténticas ejecutadas y adquiridas por el marido de la testadora, o se permitiese extraer del edificio unas u otras permanentemente, revestirá el tal legado (así el edificio como los jardines, las obras del arte y el capital para su custodia y conservación), a los hijos de la testadora, y en defecto de éstos, a sus descendientes, sucediéndose en estos bienes por estirpe. A tal efecto, deberá hacerse constar esta condición resolutoria en el Registro de la Propiedad, al inscribir a favor del Estado la casa, y en la inscripción o resguardo del depósito de los valores que se destinen a la conservación y custodia del Museo.

2º Si el Estado crea un Patronato para la dirección, conservación y administración del Museo Sorolla, deberá ser uno de los vocales del mismo el hijo de la testadora, don Joaquín Sorolla, y en su defecto, sus descendientes, y por menor edad o imposibilidad de éstos, los demás descendientes de la testadora, por orden de nacimiento, prefiriéndose entre todos ellos el que cultivase o se distinga en el arte de la pintura.

3º Mejora a su hijo don Joaquín Sorolla García en el derecho de habilitar él y su familia la Casa Sorolla y sus jardines: entendiéndose este derecho vitalicio para el mejorado tan sólo, pero no para su familia.

4º Confía en su propio hijo don Joaquín, también vitaliciamente, la custodia y conservación de los edificios, jardines y obras de arte, aunque sobre los mismos haya fundado la testadora el Museo o lo realice el Estado a su fallecimiento.

Uno de los problemas legales que debía ser resuelto sería la naturaleza jurídica de la Fundación, por lo que en el propio Real Decreto, haciendo alusión a ello, tendría en cuenta que *la cláusula testamentaria arriba transcrita, de sus términos se deduce clara y definidamente, que aunque la causante, al establecer la institución dijo “lego al Estado español”, lo que hizo fue crear el Museo que lleva el título de Sorolla, y este legado lo dejó para el caso de que, durante sus días, no fundara dicho Museo; es decir, que su voluntad, su decidido propósito fue instituir una fundación de carácter permanente y de enseñanza artística y gratuita por medio de la contemplación y estudio del arte pictórico, perpetuando así, además, la memoria del gran Sorolla, su esclarecido autor, al mismo tiempo que al establecerse tal fundación, señaló como bienes propios de ella, el hotel donde las obras se hallan coleccionadas las mismas obras y, por último, un capital cuyas rentas habían de destinarse a la conservación y custodia del expresado Museo, por lo que se consideraba que la institución tendría todos los requisitos que exigía el artículo 2º del Real decreto de 27 de septiembre de 1912, esenciales para que pueda ser definida la fundación como benéfico docente, a saber: su carácter permanente, gratuito y cultural, mediante la exhibición pública de todo o la mayor parte de la obra artística del admirado maestro, y ser un conjunto de bienes dedicado a la enseñanza, índole y carácter de la institución, que no pueden quedar desvirtuadas, por el hecho lógicamente derivado del derecho que la ley otorga de modo imperativo a los descendientes de la fundadora (art.913 del Código Civil), de que sea respetada su legítima, y que obliga, según afirma razonablemente, los ejecutores testamentarios, a no poder adjudicar a la fundación (art.817) el capital necesario para producir las 20.000 pesetas en que la fundadora calculaba los gastos de conservación del Museo; pero que no pueden negarse desde el momento en que existe la incalculable riqueza que suponen los cuadros del inmortal Sorolla y el hotel que ha de dedicarse a contenerlos para admiración de propios y extraños. Se aludiría a su vez la generosidad de los causahabientes de la fundadora, para hacer posibles las operaciones testamentarias, y su desprendimiento al incluir en el índice o inventario de las obras que forman el Museo, cuadros y retratos que la causante excluyó en beneficio de sus herederos, al mismo tiempo que se incitaba el valor patriótico del propio legado, expresado en unos términos que no dejaban duda: es tal la grandeza e importancia de este tesoro artístico, que el Estado no puede menos de aceptarlo agradecido, pensando siempre que, si en el orden económico tiene un valor inapreciable, en el espiritual lo alcanza aún más subido, y en el patriótico constituye un ejemplo que debe ofrecerse al mundo entero, para satisfacción propia y estímulo ajeno ya que es testimonio perenne no solo de valer de uno de sus más preciados hijos en un determinado momento del arte pictórico nacional, sino del ardiente patriotismo de una ilustre dama que, encendida en el santo amor de España, llevó sus generosidades más allá de lo que le consentían las leyes, por lo que se señalaba la*

necesidad de señalar una subvención para el sostenimiento de los imprescindibles gastos de conservación, custodia y vigilancia del Museo Sorolla, *con lo cual y armonizando ésta obligada aceptación en virtud del precepto del artículo 12 del Real decreto de 27 de septiembre de 1912 (según el que, cuando se destinen a la enseñanza o incremento de las letras, ciencias y artes bienes o capitales determinados, sin constituir fundación, corresponde al Ministerio de Instrucción Pública aceptar la manda y disponer lo necesario para su exacto cumplimiento) con la afirmación que el propio Decreto sienta en el párrafo 3º de su artículo 11, de que las fundaciones no perderán su carácter, a los efectos del protectorado, por recibir auxilio del Estado, preceptos que, aunque parezcan contradictorios, por exigir el último que ésta sea voluntaria y no indispensable para la subsistencia de la Fundación, en casos como el presente no pueden contradecirse, porque por una parte debe aceptarse el legado y de otra debe el Ministerio, según el artículo 1º de la Instrucción vigente, amparar y proteger la Fundación Museo Sorolla, aunque no pueda ésta subsistir sin la subvención y socorro del Estado, quien no puede hacer abandono de los cuadros de Sorolla, ni del espléndido local que se le ofrece para albergue de los mismos.* La aceptación del Legado Patrimonial de Sorolla cumpliría asimismo todos los requisitos legales, como quedaba reflejada en los considerandos de la disposición:, que por su importancia recogemos casi literalmente: 1º) Considerando las condiciones que señalaba el artículo 44 de la Instrucción de 24 de julio de 1913, *toda vez que aquí el Estado obrará no como Poder, sino como propietario*; 2º) Considerando que las fundaciones benéfico-docentes pudieran ser de orden meramente particular, que no se hallase regulado por el Estado ni intervenido por cualquiera de sus organismos, y de carácter público relacionado con algunos de los fines que por aquellos tengan atribuidos y que el mismo Estado regule, se podía incluir esta Fundación en este régimen; 3º) Considerando que las fundaciones eran regidas por la voluntad manifiesta del fundador, por el acuerdo de las personas a quienes corresponda su patronazgo y, en su defecto, según preceptúa el artículo 5º del referido Real decreto de 27 de septiembre de 1912; 4º) Considerando que al Gobierno de Su Majestad incumbiese el protectorado *sobre todas las instituciones de esta clase, lo mismo las de orden meramente particular que las que revistan carácter público, ejerciéndolo, en su nombre, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes*; 5º) Considerando que las fundaciones pudieran constituirse con toda clase de bienes y derechos y desde el momento en que se hallen constituidas o por cualquier modo se acredite su existencia están capacitadas para adquirir y poseer y 6º) Considerando que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes era el único competente para clasificar esta Fundación, desde el Real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 29 de junio de 1911, resolutorio de un conflicto jurisdiccional entre dicho Departamento y el de la Gobernación del Reino.

En el ámbito del sistema museístico nacional cabe mencionar la transformación jurídica que va sufrir el Museo del Prado a raíz de la publicación de la **Real orden de 4 de abril de 1927**, al serle otorgada

personalidad jurídica, por lo que *podría, por tanto, adquirir, poseer y administrar bienes de todas clases, bajo la inspección del Ministerio de Instrucción Pública, sin que pueda enajenar sin expresa autorización del Gobierno* (art.1). Con ello el Patronato del Museo del Prado adquiriría una cierta autonomía propia, diferente al resto de los museos públicos, que como así indicaba la Exposición de Motivos, fundamentado en el hecho de haber *demostrado en la celosa y competente gestión de los altos intereses artísticos que se le encomendaron, que es acreedor a los mayores elogios y que merecen ampliarse sus atribuciones para el mejor servicio*. De esta manera el Patronato podría formar y proponer al Ministerio de Instrucción Pública anualmente el plan de las obras que creyera conveniente realizar en el edificio (art.2), la forma de ejecución de las obras, bien por concursos parciales, por administración o en forma mixta(art.3), correspondiendo así mismo la misión de inspeccionar y vigilar las obras que en el edificio del Museo se ejecutasen, informando al Ministerio de las deficiencias que se observen para que puedan ser subsanadas (art.4). Al igual que había ocurrido en la etapa anterior se siguieron declarando algunos Museos Provinciales de Bellas Artes de utilidad pública, como fue el caso del Museo de Bellas Artes de Sevilla por **Real orden de 15 de julio de 1925, por lo que quedaba incorporado al Estado, a raíz de la instancia elevada por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría**, de Sevilla, el 3 de marzo del año 1925, por lo que considerando que *el referido Museo de Bellas Artes reúne en el momento presente las condiciones precisas para organizarle como Museo provincial, puesto que tiene local adecuado, se halla constituido como preceptúa el artículo 2º del Real decreto de 24 de julio de 1913, por pinturas y esculturas procedentes de depósitos y donaciones de Corporaciones oficiales y de particulares, con asimismo que existe en dicha ciudad Academia provincial de Bellas Artes*, tendría bien en disponer que el Museo de Bellas Artes de Sevilla fuese declarado de utilidad pública, quedando incorporado al Estado. Del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5º, capítulo 6º, del citado Real decreto, sería nombrado una Junta de Patronato que estaría formado por Presidente, el de la Academia provincial de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Gonzalo Bilbao; Vocales: Joaquín Hazañas, Andrés Parladé, Conde de Aguilar, D. Adolfo Rodríguez Jurado y Joaquín Bilbao; los Vocales Suplentes serían Manuel González Santos y José Rico Cejudo, pertenecientes todos a la Real Academia provincial de Bellas Artes de Sevilla; D. Manuel Campos Munilla, como representante de la Comisión de Monumentos; un Representante por el Excmo. Cabildo Eclesiástico, y en concepto de Vocales natos, el Presidente de la Diputación provincial, el Alcalde y el Director del Museo, Cayetano Sánchez Pineda.

**- Inventario de los Monumentos Históricos y Artísticos del Reino.**

Con motivo de la celebración de las Exposiciones de 1929 de Sevilla y Barcelona se dispuso por **Real orden de 6 de noviembre de 1929** que se creara una Comisión Revisora, designando a Elías Tormo y a Manuel Gómez



Moreno, en representación de las Reales Academias Españolas de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia respectivamente, para que elaboraran un avance del Inventario del Tesoro Artístico Nacional, debido a *La abundante y valiosa colección de objetos artísticos e históricos de valor inapreciable que en las actuales Exposiciones de Barcelona y Sevilla atrae la admiración de sus numerosos visitantes, acrecentando nuestra fama tradicional de ser depositarios de un Tesoro artístico incomparable, parece señalar la ocasión propicia para realizar con la mayor rapidez un avance en el inventario de aquél, tomando como base los catálogos publicados por dichas Exposiciones, a fin de que conste de modo fehaciente cuáles son los objetos que por razones de Arte o de Historia presentan tal interés nacional que su salida del Reino constituiría grave daño y notorio perjuicio para el Tesoro Artístico Nacional.* Sería con el **Real decreto de 15 de mayo de 1930** por el que se constituirá la formación de un Inventario General de los Monumentos Históricos y Artísticos del Reino, continuando la formación del inventario general de los Monumentos históricos y artísticos del Reino, que había sido acordado por los Reales decretos de 1º de junio de 1900 y 14 de febrero de 1902, y la revisión en caso preciso la nueva formación de los catálogos por provincias que haya dictaminado desfavorablemente la Comisión Revisora creada por Real decreto de 22 de febrero de 1922 y constituida por Académicos de las Reales Academias Española, de la Historia y Bellas Artes de San Fernando (art.1).

---

## **CONCLUSIONES**

---

I. Se constituye un concepto ambiguo en el Estado Liberal que será el Patrimonio Monumental, constituido por un grupo de bienes heterogéneos, tanto bienes muebles como bienes inmuebles, fundamentado en un pretendido valor histórico y artístico unido a una identidad nacional.

En este ámbito conceptual heterogéneo del Patrimonio Monumental podemos incluir en este momento:

- EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO, probablemente el más considerado por la crítica artística, resaltándose en estos años los estilos medievalistas identificado con el espíritu del nacionalismo liberal.
- EL PATRIMONIO PICTORICO Y ESCULTORICO, que va a articular en torno al mismo un verdadero mercado, cotizándose especialmente la pintura religiosa de Murillo, y que va a suponer en muchos ámbitos un verdadero despojo del Patrimonio.
- EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, también identificado como antigüedades, que se pone de moda desde la etapa de la ilustración y va generando una pasión coleccionista, tanto de los particulares, la mayoría eruditos, como el propio Estado, que lo identifica con valores nacionalistas.
- EL PATRIMONIO NUMISMATICO y EPIGRAFICO, muy cercano al anterior, y que desarrolla a finales del siglo XVIII una verdadera pasión coleccionista.
- EL TEJIDO URBANO DE INTERES HISTÓRICO y ARTISTICO, generado por las transformaciones estructurales de las ciudades a raíz de la revolución industrial, por lo que se va air definiendo el entorno urbano como objeto de defensa monumental.

II. El régimen jurídico de estos bienes van a estar fundamentada por el derecho absoluto de la Propiedad propia del ordenamiento jurídico del Estado Liberal, por lo que se van a confrontar los intereses privados, cualquiera que fuese el dueño del bien, con los intereses públicos, identificado en el propio Estado.

Un gran número de bienes van a estar en el seno del dominio de una serie de entidades públicas o privadas, que el propio Estado intentará tutelar, que serían los siguientes:

. EL PATRIMONIO ECLESIASTICO MONUMENTAL, conjunto de bienes muebles e inmuebles, en gran parte heredados desde la etapa medieval y la eclosión de la Contrarreforma, cuya configuración original estaría identificada como un valor espiritual, para posteriormente otorgarle un valor de interés histórico y artístico, que fundamentará la intervención del Estado, surgiendo un proceso de descontextualización de dichos bienes.

La controversia entre el valor espiritual y los pretendidos valores histórico y artístico se unirían a un debate doctrinal en torno al propio derecho de la propiedad eclesiástica, que incluso desde algunos sectores pondrán en duda la intervención del propio Estado, convirtiéndose en el eje del ordenamiento tutelar de estos bienes.

– El PATRIMONIO MONUMENTAL MONÁRQUICO, conjunto de bienes muebles e inmuebles de carácter artístico e histórico perteneciente en un primer momento al ámbito privado del Monarca. En una evolución conceptual de los mismos, asistimos desde la Ilustración a una concepción pública de los mismos, al identificarse como bienes de exaltación de la propia Monarquía identificada con el Estado.

Se va distinguiendo en el régimen jurídico de dichos bienes, un tratamiento distinto entre los bienes que van a proseguir en el ámbito del dominio privado del Monarca, y aquellos que empiezan a ser identificados con la propia identidad de la Nación.

– El PATRIMONIO MONUMENTAL MUNICIPAL y de las CORPORACIONES PÚBLICAS, referente fundamentalmente a aquellos bienes inmuebles que comienzan a ser dotados de un pretendido valor artístico e histórico, y que van a ponerse en juego su existencia fundamentada en muchos casos por una pretendida modernidad urbanística sustentada en realidad por intereses privados.

La destrucción de las murallas, postigos medievales, callejuelas, e incluso los entornos de algunos monumentos arquitectónicos se convertirán en un objeto de confrontación entre Estado y las entidades municipales.

– EL PATRIMONIO MONUMENTAL en el ÁMBITO DEL DOMINIO PRIVADO, formado por bienes muebles e inmuebles de interés histórico y artístico, cuya mercantilización va a suscitar toda una confrontación de intereses entre el propio valor económico del bien y el pretendido valor artístico e histórico que intenta justificar el propio Estado.

Las controversias entre las concepciones absolutas del derecho de la propiedad privada y los intereses públicos se convierten en la clave de la bóveda tutelar de este tipo de bienes.

III. El papel del Estado con respecto a la tutela del Patrimonio Monumental va a ir oscilando con respecto al valor que le va a ir dotando estos bienes:

- En la etapa de la Ilustración, el arte se convierte en un instrumento de formación de los propios súbditos, e incluso de exaltación ideológica de la propia Monarquía, al identificar dichos bienes con el fundamento del propio Estado, especialmente en el caso de las antigüedades clásicas.

- A partir de la configuración inicial del estado Liberal, el Patrimonio Monumental de interés público hereda los mismos fines que en la etapa anterior, aunque cambiando los actores públicos, ya que aunque sigue

considerándose como instrumento educados de los nuevos ciudadanos, se aporta como novedad la exaltación de los valores de los llamados Estados-Nación, entidades políticas surgida después de la derrota napoleónica y la irrupción del triunfo liberal.

- Desde finales del siglo XIX hasta principio del siglo XX, en la etapa que denominamos como crisis del Estado Liberal, se va cambiando radicalmente la concepción del propio Estado Liberal, por lo que si en cierta manera se sigue valorando la identidad nacional en un gran número de estos bienes, se va produciendo una intensificación de su valor mercantilista, lo que provoca una reacción doctrinal de considerar que estos bienes sean tutelado por el estado, independientemente de cuál fuera su dueño, tesis ya que podemos apreciar en algunos autores como Víctor Hugo o Goethe.

IV. En base a la configuración pública de una verdadera conciencia patrimonial por parte del Estado, se va comenzar a regular toda una serie de disposiciones normativas que van a tener como base la evolución del régimen de los derechos patrimoniales en el seno del Estado Liberal:

- Etapa de la configuración de la Propiedad Estamental Monumental, propio del régimen de las Monarquías Absolutistas, considerándose estos bienes adheridos al propio estamento al que pertenece, por lo que la intervención del Estado es prácticamente limitada.

No obstante, se va a ir desarrollando un amplio sistema normativo por parte de los Papas desde la etapa del Humanismo y por la propia Monarquía francesa que abre el camino a una verdadera intervención pública de la tutela del Patrimonio Monumental.

- Etapa de la ruptura de la Propiedad Estamental Monumental con la transformación de esos bienes en Dominio Público. Será durante la etapa de la Revolución Francesa proyectándose en las primeras revoluciones liberales del siglo XIX.

Se genera en esta etapa en el ámbito revolucionario los debates asamblearios sobre la concepción de los bienes que deben de ser salvaguardado, que abren el camino sobre la construcción jurídica del llamado Patrimonio Nacional, que en suma habían pertenecido a la Monarquía y a la Iglesia.

Al mismo tiempo en los expolios de las tropas napoleónicas de los países sometidos se va a articulando un debate en el propio seno de la doctrina francesa de la existencia de un bien nacional que debía de ser respetado por los países invasores, naciendo un verdadero bien jurídico en el seno del derecho internacional.

- Etapa inicial de la Propiedad No Estamental Monumental, surgida en la propia construcción inicial del Estado Liberal, que se irá desarrollando en todo el siglo XIX. Se conceptualiza un carácter absoluto del Derecho de la propiedad, por lo que se limita la propia intervención del Estado.

La impronta del Código Civil Napoleónico en los ordenamientos europeos genera una conceptualización absolutista del régimen patrimonial del Patrimonio Monumental, lo que va a impedir que se configuren una verdadera regulación de estos bienes.

– En la etapa de la crisis del Estado Liberal, se irá produciendo una transformación conceptual del derecho absoluto del Estado Liberal y la incorporación de una incipiente tesis de la función social de la propiedad, que va a tener una amplia proyección en los sistemas normativos sectoriales. Desde la perspectiva doctrinal las teorías de Riegls van a transformar la concepción del Patrimonio Monumental, el bien deja de ser de interés inherente a un propietario, para convertirse en un bien de interés público, más allá de su régimen patrimonialista, e incluso de puras pretensiones nacionalistas. Sus postulados inspirarán toda la producción normativa sobre el Patrimonio Monumental que se va a ir delimitando durante esta etapa, por lo que en su proyecto para la reorganización administrativa de la tutela de los monumentos en Austria redactado en 1903, ya apostaría por una intervención pública en el Patrimonio Monumental independientemente de quien fuera su propietario. En el prólogo de la edición italiana escrita por el jurista Manlio Frigo se subraya la nueva función que le corresponde al Estado como garante tutelar del Patrimonio Monumental, punto en común de propuesta austriaca con otros proyectos europeos del momento, será haberlo convertido en interés público, al mismo tiempo que se resaltaría en este aspecto la limitación de la tutela sobre la propiedad privada

La amplia producción normativa surgida desde finales del siglo XIX hasta los primeros decenios del siglo XX va a estar fundamentando en:

1º) Respeto a la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles de interés histórico y artístico que configuran el Patrimonio Monumental, aunque superando el carácter absoluto de etapas anteriores.

2º) Potestad del Estado sobre los bienes de interés histórico y artístico que configuran el Patrimonio Monumental en base a un interés general que prevalece sobre los intereses privados y que se articula en las siguientes medidas:

- Capacidad de expropiación del bien en función a la Ley de Expropiación Forzosa de interés general que se había establecido en todos los ordenamientos jurídicos europeos, con la subsiguiente indemnización al propietario.
- Los límites de exportación de los bienes muebles de interés histórico y artístico, incluyéndose un derecho de retracto y tanteo por parte del propio Estado.
- El Estado establecerá un procedimiento de clasificación de aquellos bienes que merecen ser tutelados por su interés histórico y artístico, clasificación que marcará la intervención pública sobre el bien.



Es en la legislación francesa e italiana donde se desarrollan claramente estos principios. En Francia se va a promulgar dos importantes leyes: La Ley de 1887 y la Ley de 1913, a lo que se unen un amplio número de disposiciones normativas, donde ya se perfila la quiebra del derecho de la propiedad privada y la primacía de un interés general a la hora de tutelar. En la misma línea podemos encontrar el sistema normativo italiano, que culmina en la Ley de 1939.

V. Los instrumentos jurídicos que el Estado va a poner en marcha en el ámbito tutelar del Patrimonio Monumental, dependiendo del régimen patrimonial de estos bienes serían los siguientes:

- Conversión del PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO en DOMINIO PÚBLICO, alentado por el desarrollo de otros sectores normativos, como serán la propia legislación minera, al considerar que todos los bienes del subsuelo son de propiedad del Estado, y la inclusión de la expropiación por utilidad pública, nacida como consecuencia del desarrollo de la infraestructura territorial, que se proyectará en el ámbito de las excavaciones arqueológicas.  
Al mismo tiempo serán respetadas la posición tanto del dueño del fundo como del descubridor de los bienes arqueológicos bajo una cuantía económica.
- Límites en la EXPORTACION DE BIENES DE INTERES ARTISTICO E HISTORICO, regulándose algunos aspectos esenciales:
  - a) Autorización de la exportación de bienes muebles e inmuebles de autores muertos, por lo que habría libertad de comercio en el caso de autores vivos, por lo que se va imponiendo un criterio cronológico de tutela patrimonial.
  - b) El derecho de retracto y tanteo como instrumento privilegiado del Estado para poder adquirir aquellos bienes que considere oportuno.
  - c) Se instaura un régimen penal fundamentado en el delito de contrabando, especialmente penalizada con una cuantía económica y la confiscación del propio bien.
- Límites en el DERECHO DE USO Y DISPOSICION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PRIVADO, de interés histórico y artístico, especialmente en el campo de la restauración.
- Límites en la libre disposición de los bienes pertenecientes al PATRIMONIO ECLESIASTICO MONUMENTAL, por lo que se irá imponiendo al igual que los particulares un régimen de autorización de ventas de los objetos pertenecientes a su dominio.
- Regulación del llamado COLECCIONISMO PUBLICO, concretamente los bienes pertenecientes al Estado, bien por adquisición, donación o herencia, que va a dar lugar a las

instituciones públicas de servicios culturales, como vana a ser los MUSEOS PÚBLICOS, las BIBLIOTECAS PÚBLICAS y los ARCHIVOS PÚBLICOS.

VI. En el ámbito de la España Liberal se pueden destacar una serie de peculiaridades digna de tener en cuenta a la hora de establecer una trayectoria del sistema tutelar del Patrimonio Monumental:

- El régimen específico del Patrimonio Monumental Eclesiástico, por lo que la Iglesia fundamentada en un pretendido régimen del carácter absoluto del derecho de la propiedad, continuamente va a ser reacia a toda intervención administrativa.
- El régimen específico del Patrimonio Monumental Monárquico, que prácticamente diluye cualquier intervención pública hasta bien entrada el siglo XIX.
- El carácter absoluto del dominio Privado del Patrimonio Monumental que va a prolongarse durante todo el periodo liberal.
- Una escasa institucionalización administrativa, que llega ser más honorífica que dotada de una prerrogativa intervencionista, enfrentándose las propias instituciones y el propio Estado con los intereses privados.
- Las propias circunstancias sociopolíticas que vive el país, desde los constantes conflictos bélicos, la situación económica, el peculiar régimen del propio Estado Liberal confluyen en la tutela del Patrimonio Monumental de nuestro país.

VII) Durante la Monarquía Ilustrada se produce dos hechos trascendentales en la configuración del sistema normativo: La quiebra de la propiedad estamental y la inclusión del derecho de la propiedad privada como pilares del ordenamiento jurídico inspirado en el pensamiento de la ilustración, que se va a proyectar en todo el programa del reformismo ilustrado en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico.

En base a este régimen legal se produce un proceso inicial de intervención administrativa de la tutela del Patrimonio Monumental, muy cercana a la regulación normativa que se estaba produciendo en otras Cortes ilustradas europeas.

Se va a promulgar en este periodo el primer ordenamiento jurídico propiamente dicho en el ámbito español, la Real Cédula de 1803, intentando unificar todas las disposiciones normativas que hasta este momento habían ido surgiendo en el ámbito español, incluyéndose posteriormente en la Novísima Recopilación, convirtiéndose de esta manera en la base legal del ordenamiento español en esta ámbito sectorial.

Con referencia al Patrimonio Monumental Estamental, se rompe el vínculo con el estamento como patrimonio de identidad, por lo que comienza a existir un interés público sobre los mismos, por lo que quedarían tutelados los

bienes vinculados a la corona de interés público y aquellos bienes eclesiásticos que por su valor histórico y artístico se le considera de interés público, por los que los de dominio privado quedan fuera de la tutela pública. El hecho de romper el vínculo no está unido a una concepción de dominio público, ya que un gran número de estos bienes van a seguir perteneciendo a estos estamentos. Los bienes vinculados a la Corona de Interés Público tendrán como finalidad la educación de los súbditos del Estado Monárquico, en el ámbito general de la idea del progreso nacional, por lo que deja de ser exclusivamente bienes de exaltación de la Monarquía, de ahí que se abran las galerías reales al conocimiento del pueblo, como instrumento educador del mismo. Son bienes de propiedad real pero con una finalidad pública, por lo que los bienes regios no vinculados a la Corona, quedarían exceptuados de tutela pública. El Patrimonio Eclesiástico Monumental va a sufrir al mismo tiempo una transformación en su naturaleza jurídica, ya que se puede apreciar bienes que van a ser confiscados por el Estado, convirtiéndose en Bienes Nacionales, y que van a contar con una tutela directa del propio Estado, especialmente a raíz de las medidas de confiscación de los bienes pertenecientes a la Compañía de Jesús en el reinado de Carlos III, y aquellos bienes que pertenecen al dominio privado de la Iglesia, pero van comenzar a ser tutelados por el Estado, al concebirse un valor histórico y artístico, más allá del exclusivamente espiritual. La inclusión de un incipiente derecho privado abre las puertas a una serie de prerrogativas del Patrimonio Monumental en el dominio privado. No son bienes vinculados a ningún linaje, pero si son adheridos a un derecho de disposición y gozo por parte de sus propietarios, aunque van a ser objeto de una incipiente tutela pública en aquellos casos donde se precise un interés nacional, que podemos desglosar en tres puntos:

- 1º) Será en el Patrimonio Arqueológico (las llamadas Antigüedades), donde se inicia una verdadera tutela del Patrimonio Monumental, con las distintas disposiciones normativas a través de todo el periodo borbónico, insertada en la ya citada Real Cédula de 1803.
- 2º) Tráfico de bienes muebles de interés artístico, con las promulgaciones de las Reales Órdenes del 5 de octubre de 1779 y 16 de octubre de 1779, prohibiendo la exportación de bienes de interés histórico y artístico y antigüedades.
- 3º) El principio de ornato, con las ordenanzas municipales, como en el caso de Cádiz.

VIII) En contraposición a la tradicional imagen de la destrucción de nuestro patrimonio nacional por las tropas napoleónicas, que quedaría plasmada en el propio espíritu nacional, como podemos apreciar en los textos del propio Benito Pérez Galdos, la irrupción del régimen bonapartista en el contexto español va a ser determinante en el sistema tutelar del Patrimonio Monumental, especialmente en aquellos bienes que habían pertenecido a los

estamentos del Antiguo Régimen, que podemos resumir en las siguientes precisiones:

- La transformación jurídica de los bienes históricos y artísticos del PATRIMONIO ECLESIASTICO MONUMENTAL en bienes de dominio público, precedente de las posteriores medidas desamortizadoras.
- La conceptualización inicial del Museo Público, que tendrá como reflejo la fundación del llamado Museo Josefino, con el decreto de 20 de diciembre de 1809, intentándose aglutinar bienes pertenecientes tanto a la Monarquía como a la propia Iglesia.
- La promulgación de algunas disposiciones sobre prohibición de exportación de los bienes conventuales, como el Real Decreto de 1 de agosto de 1810.
- La irrupción de la política urbanística moderna con el consecuente derribo de bienes inmuebles para la configuración de plazas públicas, por lo que se inicia una controversia de intereses, proyectándose especialmente en Madrid con el derribo de amplios conventos.

IX) En la configuración inicial del Estado Liberal el ideal de la nueva burguesía, triunfadora de esta nueva etapa que conlleva desde la invasión francesa hasta el régimen provisional de María Cristina, con los matices aleatorios del reinado de Fernando VII, se proyectará en un hecho trascendental: la definitiva abolición del feudalismo y la irrupción del capitalismo, verdadero andamiaje social y económico del nuevo sistema. Desde el constitucionalismo diocentista hasta las medidas legislativas de los distintos gobiernos de María Cristina, se van a ir produciendo la liquidación de la propiedad estamental y la incorporación del llamado absoluto de la propiedad privada. Un claro ejemplo de la nueva realidad jurídica lo constituye los distintos de la abolición de los señoríos, concretamente el decreto de 6 de agosto de 1811, la ley de 3 de mayo de 1823 y la ley de 26 de agosto de 1837, a los que se unirían las distintas medidas desamortizadoras

La nueva realidad jurídica de incorporación del derecho de propiedad burguesa frente a las pretensiones estamentalistas de concepción feudal va tener una clara proyección a la hora de construirse un derecho específico, como fue el Patrimonio Monumental. Se va ir germinando la idea formal de la existencia de un verdadero Patrimonio Monumental de carácter público que iba a legitimar la construcción política e ideológica del incipiente Estado Liberal. Tenemos que partir de la base que va a ir surgiendo una nueva concepción patrimonial en estos primeros procesos revolucionarios, que irán delimitando la idea de un interés nacional en algunos bienes histórico-artísticos, por lo que la Nación, como nuevo sujeto de personalidad política, tendrá el deber de

proteger. Este interés nacional habría nacido de las experiencias traumáticas de los expolios napoleónicos, por lo que se percibe una sensación de pérdida de unos bienes identificativo de la comunidad política, símbolos parlantes de la cohesión de los mismos, que van más allá de una simple reclamación de sus legítimos propietarios. De ahí que con la derrota napoleónica, el Estado reclame en el Congreso de Viena su devolución, que después de una intensa gestión pudieron recuperar aquellos que habían pasado a pertenecer temporalmente a la Corona francesa, mientras que los que habían quedado en el dominio privado de los mariscales franceses de las tropas napoleónicas quedarían frustrados su devolución.

En el camino de la política tutelar del nuevo Estado cabe distinguir entre aquellos bienes que quedaran adheridos a la propiedad estatal y aquellos que se incorporan al dominio privado. A raíz de las sucesivas medidas desamortizadoras que van a jalonar el proceso de transformación jurídico de la propiedad estamental en este periodo, un gran número de bienes conventuales, muebles e inmuebles, pierden su ancestral identidad estamental para incorporarse al tráfico comercial, lo que va a provocar una amplia destrucción patrimonial, por lo que comienzan a alzarse voces desde los sectores más eruditos, como las Reales Academias de Bellas Artes y la Historia para que puedan ser protegidos, reclamando unos intereses histórico y artístico, más allá de una funcionalidad espiritual, pudiéndose considerar los primeros bienes propiamente nacionales de tutela del Patrimonio Monumental.

En el ámbito del PATRIMONIO MONARQUICO MONUMENTAL se puede establecer un proceso de evolución conceptual en dos etapas fundamentales:

- El predominio de la concepción privada de los bienes de la Corona en la etapa de Fernando VII, que deja traslucir una incipiente concepción de apertura pública sin renunciar a su dominio privado con la fundación del incipiente Museo del Prado, que se contrapone con las concepciones privadas que se proyecta en su propio testamento.
- Durante la etapa de las Regencias prácticamente va a seguir existiendo el mismo régimen tutelar.

La política institucional de tutela del PATRIMONIO ECLESIASTICO MONUMENTAL va a estar marcada por la irrupción de las medidas desamortizadoras, aunque al mismo tiempo comienza a configurarse un modelo tutelar del Patrimonio Monumental, que podemos resumir en tres etapas fundamentales:

- Los vaivenes institucionales de la etapa de Fernando VII entre la política de devolución de bienes eclesiásticos, propio del régimen absolutista, como la Real Orden de 20 de mayo de 1814, relativa a la entrega a los regulares de sus conventos y propiedades, de una



subsiguiente etapa de confiscación del periodo constitucionalista, con el Decreto del 25 de octubre de 1820 y la subsiguiente creación de museos públicos, hasta la etapa final de vuelta a la devolución de bienes con el real decreto de 24 de octubre de 1823.

- Durante la etapa de la Regencia, especialmente con María Cristina se va a crear un verdadero aparato institucional del Patrimonio Monumental Desamortizado, a instancia del despertar de una verdadera conciencia pública especialmente con la aparición del Manifiesto de Larra.

De esta manera durante los gobiernos de Martínez de la Rosa y el Conde de Toreno, aparecerán las primeras instituciones administrativas como fueron las Comisiones Civiles, a las que se unirán en la etapa posterior de Mendizábal, que van desde la aparición de las Juntas de Intervención de objetos de ciencias y arte, hasta las Comisiones Científicas y Artísticas.

Al mismo tiempo surge la primera red de museos públicos con los bienes confiscados al estamento eclesiástico, así como los archivos monásticos.

En esta etapa se produce una intensificación en las excavaciones arqueológicas tanto institucional como privada que va a producir un verdadero sistema normativo donde predominará el DOMINIO PRIVADO sobre los INTERESES PUBLICO. No se puede hablar todavía en esta fase del Patrimonio Arqueológico como bien de dominio Público, aunque ya se puede imbuir algunos rasgos concretos hacia una verdadera publicación de estos bienes:

- Una primera iniciativa pública lo encontramos ya con el propio régimen josefino, con la regulación tutelar de la ciudad de Itálica.
- Durante la etapa de Fernando VII se sigue imponiendo la vigencia de la Real Cédula de 1803, con la promulgación de las Circulares de 2 de octubre de 1818 y 19 de septiembre de 1827, por lo que se incita al derecho del propietario privado.
- En la época de las Regencias se intuye una incipiente intervención administrativa tanto en los límites de los particulares en la adquisición de bienes arqueológicos en dominio público, como el caso de la denegación por la Real Academia de la Historia a la pretensión de adquisición de Domingo Ronchi, como en los ensayos institucionales de configuración del sistema administrativo a pesar de quedar frustrada, como fueron la creación de los inspectores de antigüedades.

Debemos de señalar que durante este periodo se intentaría regular el TRAFICO COMERCIAL DE OBRAS DE ARTE, debido al coleccionismo emergente ya en la etapa de Fernando VII, produciendo grandes pérdidas de

obras de arte, por lo que se intentaría paliar con la promulgación de algunas disposiciones como la promulgación de las Reales Ordenes de 2 de septiembre de 1836, 28 de abril de 1837, y 20 de agosto de 1838, aunque fracasando en su aplicación.

X) Durante la etapa isabelina, que podemos definir como la configuración final del Estado Liberal, se va a producir la irrupción definitiva de los principios jurídicos del derecho absoluto de la propiedad privada, claramente articulado en el periodo moderado, que se va proyectar en el propio régimen tutelar del Patrimonio Monumental, al considerarse dichos Bienes como adherentes al propio propietario, por lo que asistimos a una clara libertad por parte del mismo de su uso y disposición.

Asistimos a la primera verdadera reforma institucional del sistema tutelar del Patrimonio Monumental, pudiéndose distinguirse tres etapas:

I) Durante la etapa de la Década Moderada (1844-1854), con la creación de las llamadas Comisiones de Monumentos Históricos Artísticos.

II) La reforma institucional que se produce en la etapa del Bienio Progresista (1854-1856) con la Reorganización de las Comisiones de los Monumentos.

III) El ensayo frustrado de la centralización administrativa de la tutela del Patrimonio Monumental en el periodo de la Unión Liberal (1856-1866).

En esta etapa se asiste a un **ensayo frustrado de la construcción jurídica del Patrimonio Nacional**, al quedar su tutela reducida aquellos bienes que se habían incorporados como bienes nacionales, o sea los que había sido incorporados en base a la transformación que se había producido en el Patrimonio Monumental Estatal, por lo que desde esta perspectiva el Estado se había convertido en un sujeto coleccionista al igual que los propietarios particulares. La tutela jurídica del Patrimonio Monumental como en las etapas anteriores, se va ir insertar en el seno de los derechos patrimoniales, la tutela en su conservación y protección dependerá primordialmente de cuál sea su propietario. Es durante esta etapa cuando se produce la eclosión del derecho de la propiedad privada como eje ordenador del nuevo estado burgués que va a ir naciendo a raíz de la industrialización, la creación de las redes de comunicación con la irrupción del ferrocarril y los primeros indicios de creación de la banca privada, enterrando definitivamente los pocos vestigios legales que quedaban de la llamada propiedad estamental, a raíz de las nuevas medidas desamortizadoras que se irán produciendo a lo largo del reinado. Sin embargo, es un hecho significativo que el Estado va a comenzar a intervenir, aunque muy reducidamente, en aquellos sectores normativos donde considera que un supuesto interés nacional se superpone con los intereses particulares, dando lugar a un incipiente derecho administrativo, cobrando fuerza en la llamada expropiación forzosa por utilidad pública, que va a suponer en cierta

forma una incipiente irrupción en la esfera privada. Al igual que el resto del ordenamiento jurídico isabelino, el derecho de la propiedad privada se convierte en la base sustentadora en la construcción jurídica del Derecho del Patrimonio Monumental, por lo que el propietario de los bienes de interés histórico y artístico asume todas las prerrogativas tutelares sobre los mismos, por lo que la intervención del Estado queda diluido en muchas ocasiones a una clara declaración de intenciones. Pese a ello, se va a ir abriendo el camino, aunque de manera muy lenta, a una transformación en el tratamiento jurídico de algunos bienes históricos-artísticos en virtud del llamado interés nacional (posteriormente interés público),

1º) La configuración de los bienes que van a ser considerados como de propiedad nacional, como son los que serán declarados como Monumentos Históricos Nacionales, a los que se unen la vinculación a la Corona de las antiguas colecciones regias de bienes de intereses históricos-artísticos.

2º) Aquellos bienes que perteneciendo a la propiedad privada van a ser intervenidos muy levemente por el Estado, en algunas actuaciones muy concretas, herederas a su vez de etapas anteriores, No debemos de olvidar que sigue la mayor parte del patrimonio monumental probablemente sigue en manos privadas durante la etapa isabelina por lo que un gran número de bienes van a quedar fuera de la tutela pública.

Durante la España Isabelina asistimos a la consagración definitiva de considerar al **Patrimonio Eclesiástico Monumental** como bien de interés nacional, proceso que había sido iniciado desde la afrancesada, y que se había proyectado en los periodos iniciales del régimen liberal (Trienio Constitucional, Regencia de María Cristina). Sin embargo, el tratamiento tutelar por parte de la potestad pública por parte de estos bienes no van a ser homogéneo, sino que se va a depender del régimen patrimonial en que encuentre, por lo que no podemos perder de vista cual es el régimen patrimonial en que se encuentran los bienes eclesiásticos en el periodo isabelino. El derecho de la propiedad por parte de la Iglesia se convierte en uno de los ejes primordiales del debate en torno a la construcción jurídica del ordenamiento liberal en este momento, bien en el seno de los moderados como de los progresistas, por lo que nos encontramos con una etapa convulsiva en que por un lado se reivindica por parte de las filas del moderantismo un cese de las medidas desamortizadoras, que culminará en la celebración de los Concordatos de 1851 y 1859, y un incremento de expropiaciones eclesiásticas, que se vislumbra en el periodo del Bienio Progresista (1854-56), especialmente en la Ley Madoz de 1855.

Las distintas medidas en torno al derecho de la propiedad de la Iglesia, no cabe duda que influirían en la tutela pública del Patrimonio Eclesiástico Monumental, al distinguirse una política tutelar distinta de aquellos bienes que

habían sido desamortizados, o sea convertidos en bienes nacionales, y aquellos que habían seguidos en el seno de la Iglesia, y que como tal había que respetarse, aunque no por ello no estarían ajenos a un principio de intervención estatal. Estas controversias tanto doctrinales como legales existentes en el periodo isabelino en torno al derecho de la propiedad de la Iglesia van a tener una clara proyección en el seno de la tutela pública del Patrimonio Monumental Eclesiástico durante el periodo isabelino. De ello se va a derivar una serie de cuestiones primordiales a la hora de generar un verdadero sistema normativo público de protección, especialmente en la cuestión de la titularidad, en la propia configuración del bien jurídico a proteger y en la acción de la institucionalización administrativa que va a nacer en este periodo como continuación de los experimentos realizados en los regímenes del primer liberalismo. En el régimen titular se va a ir configurando tres grupos de bienes diferenciados: 1º) Aquellos que a raíz de las medidas desamortizadoras han sido adquiridos por el Estado convirtiéndose en Bienes Nacionales, incorporándose a las colecciones públicas de la red de instituciones museísticas y archivos que se van a ir fundando por toda la geografía peninsular; 2º) Aquellos que siguen en el ámbito del régimen patrimonialista de la propia Iglesia, cuya tutela pública quedaría más limitada que la anterior, al considerarse bienes insertados en la esfera privada de la Iglesia, por lo que a raíz de la celebración de los Convenios de 1851 y 1859, la intervención del Estado quedaría diluida. Sin embargo, la identificación de los bienes históricos-artísticos religiosos (en su mayoría antiguos conventos, abadías, a las que se unirían catedrales, palacios arzobispales o algunos templos parroquiales) como bienes de valor nacional llevaron a ampliar su tutela pública, especialmente a raíz del Concordato de 1851, que abrió el camino para los primeros acuerdos institucionales entre el Estado y la Iglesia en la conservación del rico patrimonio histórico-artístico, que había constituido en los últimos siglos. Al mismo tiempo, se iría fraguando una política de restitución de la propiedad de algunos bienes a la Iglesia, con fines espirituales, bajo la tutela del Estado en el ámbito de la restauración, lo que originaría un amplio número de disposiciones normativas y 3º) Aquellos Bienes Conventuales que habían sido vendidos a particulares en principio, quedarían exentos de la tutela pública, al entrar a formar parte del dominio privado, por lo que la intervención pública quedaría diluida. Cabe mencionar la introducción de un instrumento vital en el patrimonio eclesiástico monumental que será el de Declaración de Monumento Histórico, que se generalizará en las etapas posteriores, que en este momento tendrá una traducción tutelar de quedar exenta de venta.

Durante esta etapa asistimos a la transformación jurídica del Patrimonio Monumental Monárquico, con la desvinculación del dominio privado del Monarca de una serie de bienes que se va air gestando en tres fases fundamentales:

- Una primera vinculación del Patrimonio Monumental Regio a la Corona en la Década Moderada: El proyecto de decreto del 22 de noviembre de 1845 por el que vinculasen a la Corona los palacios reales, museos, sitios, posesiones, derechos y bienes estables que eran propiedad privada de Isabel II

- La herencia de Doña María Cristina y el destino de algunos bienes históricos-artísticos no vinculados a la Corona.

- La definitiva desvinculación de las colecciones reales de la Corona durante la última etapa del periodo isabelino, con la promulgación de la ley de 12 de mayo de 1865.

En el ámbito de la concepción pública del Patrimonio Monumental se inserta al mismo tiempo la transformación jurídica como propiedad nacional de un amplio número de bienes del Patrimonio Documental que habían sido hasta este momento propiedad de la Iglesia. Se puede distinguir un proceso evolutivo en la concepción pública del sistema archivístico español:

- Una incipiente tutela pública del Patrimonio Documental en la Década Moderada, con la génesis de las Bibliotecas Públicas y el derecho de acceso a la información de los documentos históricos por parte de los particulares a raíz de la promulgación de la Real Orden de 20 de abril de 1844.

- Un nuevo ensayo de institucionalización administrativa del Patrimonio Documental durante la Unión Liberal: La creación del Archivo Central por el Real decreto de 17 de junio de 1858.

- La génesis del Archivo Histórico Nacional como reflejo del centralismo administrativo de la tutela del Patrimonio Documental a raíz de la promulgación del Real Decreto del 28 de marzo de 1866.

A pesar del carácter absoluto de la propiedad privada se van a ir produciendo una serie de límites en la disposición de gozo y disposición por parte de los propietarios, que podemos resumir en:

- El deber de conservación de los propietarios de los bienes inmuebles de interés histórico-artístico en la España Isabelina, que podemos considerar como un primer ensayo de la intervención administrativa en el ámbito del derecho de la propiedad privada.

- Los límites del tráfico de obras de arte en la incipiente mercantilización de los bienes de interés histórico y artístico, con la promulgación de las Reales ordenes de 24 de mayo de 1849, 6 de mayo de 1851, 14 de agosto de 1856 y 6 de junio de 1865.

- La intervención limitada en el ámbito tutelar del Patrimonio Arqueológico, cuyas carencias de regulación normativa no resuelve los problemas que conllevan la propia excavación arqueológica.

XI) Con la desaparición del régimen isabelino a raíz de la Revolución de 1868 hasta el advenimiento de la Restauración, se van a producir en el seno



del ordenamiento un nuevo modelo tutelar fundamentando en la inclusión del principio de intervención pública como limitador del derecho absoluto de la propiedad privada y su proyección en la tutela del patrimonio monumental en las transformaciones estructurales del estado liberal, que podríamos resumir en cuatro etapas primordiales:

- Durante el Sexenio Revolucionario se produciría una transformación jurídica del Patrimonio Monumental Estamental en Bienes de Dominio Público a raíz de los procesos revolucionarios, especialmente a raíz de la desaparición de un amplio número de bienes inmuebles y muebles que habían pertenecido al patrimonio conventual. El intento de frenar la política urbanística de las Juntas Revolucionarias llevaría al Gobierno Provisional del General Serrano a promulgar una serie de disposiciones como la Orden de 9 de junio de 1869 y la Instrucción del 11 de Mayo de 1870 y de manera muy significativa cabría resaltar el decreto de 1 de enero de 1869 por el que se introduciría un proceso claro de secularización de los bienes. Sería en la I República bajo los auspicios de Emilio Castelar cuando se promulgaría definitivamente el decreto de 16 de septiembre de 1873, que se considera un verdadero manifiesto tutelar de carácter moderno del Patrimonio Monumental.

De la misma manera, se va a producir nuevamente una política de desvinculación de los bienes pertenecientes al Patrimonio Monumental Monárquico, especialmente con la promulgación de la Ley de 9 de diciembre de 1869, a instancia del Gobierno Provisional, a las que se unirían las disposiciones legales del Gobierno de la I República sobre el destino de los bienes del Patrimonio de la Corona como los decretos de 15 de abril y 25 de junio de 1873 sobre el destino de los Archivos pertenecientes a la Corona o la Ley del 24 de 1873, disponiendo que el Ministro de Hacienda se incaute de todos los bienes que pertenecieron a la Corona. Algunos edificios significativos que habían pertenecido a la Corona como fue el caso de la Alhambra serían desvinculados del dominio privado del Rey, al mismo tiempo que se configuraría definitivamente como Museo Público el Museo del Prado.

- En la etapa del reinado de Alfonso XII (1874-1885), se reajustaría la política tutelar que había desarrollado durante el Sexenio Revolucionario, donde nuevamente se equilibraría los intereses privados con la intervención administrativa tutelar del Patrimonio Monumental. Sin embargo, encontramos como novedad institucional un nuevo ensayo de modernización administrativa del Patrimonio Monumental, especialmente con la intensificación de la potestad administrativa de las Comisiones de Monumentos en la tutela pública del Patrimonio Monumental a lo que se uniría la intensificación del papel de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia.

Sin embargo, es en el proyecto de ley elaborado por la Comisión de Monumentos de Sevilla, bajo la dirección de Demetrio de los Ríos en 1876, donde se puede encontrar el punto de partida de una verdadera política institucional de tutela del Patrimonio Monumental. A pesar de que nunca se llegó a promulgar, ya se establecía una verdadera intervención administrativa

de todos los bienes de interés histórico y artístico, independientemente de que fueran privados o públicos, conceptualizando jurídicamente al bien a proteger, bajo la denominación de Monumento.

En el ámbito del Patrimonio Monumental Eclesiástico se va a partir de la base de un respeto al derecho de la propiedad eclesiástica, que se va a proyectar en el ámbito tutelar en las controversias que se van a producir en torno al debate sobre la restauración de aquellos bienes inmobiliario que aun pertenecientes a la Iglesia tenían un valor histórico y artístico, especialmente en la restauración de la Catedral de León, que suscitó una amplia polémica institucional en cuanto a cual institución tenía preeminencia en el ámbito de la rehabilitación de edificios eclesiásticos.

El Estado instó a utilizar el procedimiento administrativo de la Declaración de Monumentos, que aún categorizado por su ambigüedad supuso un paso más en la categorización de la tutela del Patrimonio Monumental.

- Durante los primeros decenios del régimen de la Regencia de María Cristina el sistema tutelar del Patrimonio Monumental siguió la tónica dominante de la etapa anterior,

5) Durante el régimen del Directorio Militar se delimita una política de intervención administrativa que va a significar en amplios sectores normativos la preeminencia de los intereses generales sobre las Corporaciones e instituciones públicas, como los propios particulares. Aunque el derecho de la propiedad privada queda recogido incluso en el Proyecto de la Constitución de 1929, el Estado empieza a articular toda una política de generándose

La política tutelar del Estado sobre el Patrimonio Monumental no va a quedar ajena del principio de intervencionismo público, plasmándose en la promulgación del Decreto del 9 de agosto de 1926, que podemos considerar como la disposición legal más progresista de todo el ordenamiento español hasta la fecha, acorde con algunas normativas europeas de nuestro entorno, y verdadera antesala en algunos aspectos de la legislación contemporánea del Patrimonio Cultural, especialmente en algunos preceptos de la posterior legislación republicana. Para algunos autores tal disposición nacería a raíz de la situación de despojo patrimonial que seguía existiendo en España en este momento, bien por una carencia legal y administrativa que no podía impedirlo, bien por un verdadero arraigo, como lo prueba las ventas fraudulentas que realizó el

y que daría lugar incluso a un pleito judicial entre los propietarios, el comprador y el propio Estado en la irregular venta de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga que dio lugar a la sentencia de 1925.

Esta última constituye un verdadero ejemplo de síntesis entre la controversia que se estaba viviendo en el ámbito del derecho del Patrimonio Monumental, entre los intereses particulares y los intereses generales

El llamado Decreto Callejo, pondría las bases de una legislación de carácter moderno que podemos sintetizar en los siguientes puntos:

1º) Deja claro en la propia Exposición de Motivos el principio de la intervención del Estado como suprema potestad de los intereses generales sobre cualquier interés privado sobre los bienes del Patrimonio Monumental, recogiendo el espíritu que va a ir impregnando de un interés colectivo ajeno al régimen patrimonial del bien.

2º) Amplia la conceptualización jurídica del Patrimonio Monumental, delimitando con una nueva denominación, el Tesoro Artístico Arqueológico Nacional, donde se incluye en una misma tanto los bienes muebles como los inmuebles, así como una mayor variedad de bienes que se insertan en el mismo

3º) Se crea una nueva institución administrativa, la Junta del Patronato de

4º) En el ámbito de la tutela pública de los bienes inmuebles se sigue utilizando un procedimiento clasificador del bien a tutelar, que incluye los procedimientos anteriores de Monumento Nacional y Monumento Arquitectónico-Artístico, que había regulado la ley de 1915, aunque en este caso inscribiéndolo en el Tesoro Artístico Nacional. El hecho de estar inscrito en el Tesoro Artístico va a dar lugar a una serie de deberes tanto para el Estado como para los particulares a la hora de salvaguardar la identidad de los mismos.

Se autoriza el traslado de un inmueble de interés histórico y artístico

Por su parte el Estado adquiere una serie de deberes sobre el inmueble inscrito en el Tesoro, que deriva en la creación de los llamados Arquitectos de Zonas, con la promulgación del Real decreto de

6º) La consideración del Patrimonio Arqueológico como dominio público queda recogido en la propia Ley de 1926, al dejar en vigor la Ley de 1911 y el Reglamento de 1912,

Xiv En el derecho contemporáneo el interés cultural de un bien no tiene por qué implicar su conversión en público si por tal se entiende que su titularidad corresponde a una persona jurídico-pública y no a una privada, la solución es valiosa siempre que se prevean y apliquen las medidas necesarias para garantizar la efectividad de la función social de los bienes culturales. De este sencillo esquema conceptual la LPHE deja fuera a los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico (...) sus bienes son de dominio público. Esta es una de las novedades más importante de la ley estatal (...) La creación del dominio público arqueológico es un hito señero en la evolución de nuestra

normativa del Patrimonio Cultural<sup>2943</sup>. *De donde se deduce que el patrimonio artístico y de bienes culturales pertenece a la comunidad y ésta, por medio de los poderes públicos, ejerce un derecho de propiedad, de defensa y gestión sobre ellos. Lo cual hace que los objetos artísticos se sitúen en el límite entre la propiedad privada y la pública: podríamos decir que son de propiedad privada, al mismo tiempo que de titularidad pública, por lo que los objetos artísticos, los monumentos, los conjuntos, los sitios y lugares naturales son objetos especiales de cara a la propiedad. Cada vez se asienta más el principio de la propiedad compartida entre dominio directo del objeto y dominio útil del mismo, puesto que los objetos de los que hablamos tienen una doble naturaleza: la cosa como soporte físico, y el bien como utilidad que el objeto reporta. El objeto pertenece, como propiedad privada, a su poseedor (creador, comprador, coleccionista), y el bien como propiedad colectiva, gestionado por el poder público, pertenece a la comunidad. El reto del moderno derecho del patrimonio histórico, artístico y cultural, está en aclarar y fijar esta interferencia entre el disfrute colectivo y la pertenencia económica individual*<sup>2944</sup>.

---

<sup>2943</sup> BARCELONA LLOP, Javier Reflexiones dispersas sobre el derecho de los bienes culturales, p.591.

<sup>2944</sup> FERNANDEZ ARENAS, José *Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas*, Barcelona, 1996, p.118.

---

**BIBLIOGRAFIA**


---

- ACOSTA FERRERO, J.M. *Elena Whishaw. Entre la leyenda y la realidad* Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 2003.
- AGUADO, Ana *La modernización de España (1917-1939)*, Síntesis, Madrid, 2002.
- AGUILA ESCOBAR, Gonzalo *Léxico de Arqueología*, Granada, 2006.
- AGUILAR PIÑAL, Francisco, Las Academias, en *Historia de España Ramón Menéndez Pidal. La época de los Primeros Borbones. La cultura española entre el Barroco y la Ilustración (1680-1759)*, T.XXIX/2, pp.151-193, Madrid, 1985.
- Prólogo al Catálogo de M.L. LOPEZ VIDRIERO, *Los libros de Francisco de Bruna en la Biblioteca del Rey*, Sevilla, 1999.
- AGÜNDEZ FERNANDEZ; Antonio *La declaración administrativa de edificio en estado de ruina*. Editorial Comares, Granada, 1994.
- ALAMINOS, Eduardo y SALAS VAZQUEZ, Eduardo José de Madrazo, coleccionista en *José de Madrazo (1781-1859)*, Catálogo de la Exposición. Madrid, Museo Municipal, 1988.
- ALBAIZA BLANCA SOLER, Silvia *La Academia y la conservación del Patrimonio I en Academia Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Segundo semestre de 1999, Número 89, pp.28-29.
- ALBERCH FUGUERAS, Ramón *Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento*. Barcelona, UOC, 2003.
- ALBERCH, Ramón Archivos, memoria y conocimiento en ALBERCH i FIGUERAS, A., BOIX LLONCH, Lurdes, NAVARRO SASTRE, Natalia VELA PALOMARES, Susana *Archivos y cultura: manual de dinamización* Editorial Trea, Gijón, 2001.
- ALCALE SANCHEZ, María *Delitos urbanísticos*, Derecho Penal, Barcelona, Cedecs, 1997.
- ALCALA, Luis *Reflexiones acerca de la protección del patrimonio paleontológico en España* Coloquios de Paleontología, 1999.
- ALCINA FRANCH, José *Arte y Antropología*. Madrid, 2004.
- ALCINA FRANCH, J. *Arqueólogos o anticuarios*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1995.
- ALCOLEA, S. Museo del Prado, Barcelona, 1991
- ALCUBILLA, *Diccionario de la Administración Española*, Tomo V, Madrid, 1916
- ALDANONDO SALAVERRIA, I. “La Iglesia y los bienes culturales. Aproximación al estudio de la disciplina canónica” *Revista Española de Derecho Canónico*, 39, 1983.
- “La protección de los bienes culturales y libertad religiosa”, *Anuario del Derecho Eclesiástico del Estado*, Vol.III, 1987.
- ALDECOA Y VILLASANTE, José “La evolución del concepto de la propiedad y el problema de los foros” *Revista de Legislación*, Tomo 125, Madrid, 1914, pp.180-183.
- ALEGRE AVILA, Juan Manuel, “Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico” *Colección Análisis y Documentos*, n.5. Ministerio de Cultura, Madrid, 1994.
- “El patrimonio arqueológico: aspectos de su régimen jurídico”, en *Patrimonio Cultural y Derecho*, n1 pp.121-130.
- El patrimonio histórico español: régimen jurídico de la propiedad histórica en GUTIERREZ-CORTINES CORRAL, Cristina (ed.) *Desarrollo sostenible y patrimonio histórico y natural*, Tomo I, Fundación Marcelino Botín, Santander, 2002.
- “El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural”, Civitas, *Revista Española de Derecho Administrativo*, N.136, 2007, pp.859-864.
- ALEGRE AVILA, Juan Manuel *El Estatuto jurídico de la propiedad histórica*. DE DIOS, Salustiano; INFANTE, Javier, ROBLEDO, Javier, TORIJANO, Eugenia (Coord.) *Historia de la propiedad. Patrimonio Cultural*, Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, Madrid, 2003.
- ALMAGRO-GORBEA, Martín *El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia: pasado, presente y futuro*. Madrid, 1999.
- “Pedro Rodríguez Campomanes y las antigüedades” en ANES G. Campomanes en su II Centenario, Madrid, Real Academia de la Historia, 2003, pp.117-159.



- La Real Academia de la Historia, una institución al servicio de la arqueología española en *Zona Arqueológica*. Nº3, Pioneros de la Arqueología en España. Del siglo XVI a 1912. Museo Arqueológico Regional, 3 Alcalá de Henares, 2004, pp.55-68.
- “La protección del patrimonio cultural en la Historia de España” PAU PEDRON, Antonio (Coord.), La protección jurídica del patrimonio inmobiliario histórico, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2005, pp.15-34.
- ALMAGRO-GORBEA M.; MAIER J. “El futuro desde el pasado: La Real Academia de la Historia y el origen y funciones del Museo Arqueológico Nacional”. *Boletín de la Real Academia de la Historia*, CXCVI, pp.183-207.
- ALMAGRO-GORBEA, Martín; ALVAREZ MARTINEZ, José María; BLAZQUEZ MARTINEZ, José y ROVIRA, Salvador, *El disco de Teodosio*, Real Academia de la Historia, 2000.
- ALMELA VICH, C. Delitos sobre el Patrimonio Histórico *Actualidad Penal*, núm. 41, 6 al 12 de noviembre de 2000.
- ALONSO IBAÑEZ, Mª del Rosario, *El Patrimonio Histórico. Destino público y valor cultural*. Universidad de Oviedo, Civitas, 1992.
- Los Catálogos Urbanísticos y otros Catálogos protectores del Patrimonio Cultural Inmueble. *Rue y Monografía asociada a Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación*. Numero 11, Navarra, 2005
- ALONSO, M.C. “Excavaciones arqueológicas en el siglo XVIII: el descubrimiento de las ciudades de Herculano, Pompeya y Estabia” *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, 3, 1996.
- ALONSO REVENGA, P.A. “Las versiones del hallazgo del tesoro de Guarrazar” *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, XIV, 1996, pp. 95-110.
- ALVAREZ, José Luis, *Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural*, Madrid, Espasa Calpe, 1992.
- ALVAREZ, M.A. y MÉLIDA, J.R. “Un monumento desconocido. La ermita de San Baudelio en el término de Casillas de Berlanga (Soria)”, *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, XV, Madrid, 1907, pp.144-155
- ALVAREZ ALONSO, Clara *Las dos caras de Jano. Propiedad y constitución en el primer liberalismo español* en ROBLEDO HERNANDEZ, Ricardo; DE DIOS DE DIOS, Salustiano, INFANTE MIGUEL-MOTTA, Javier *Historia de la propiedad en España: siglos XV-XX*. Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, 3-6 de junio de 1998, pp.297-328.
- ALVAREZ CORTINA, Andrés, “Bases para una cooperación eficaz Iglesia-Estado en defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural” *Ius Canonicum*, Vol. XXIV, núm. 49, 1985.
- ALVAREZ-GENDIN, Sabino *El dominio público: Su naturaleza jurídica*, Barcelona, Bosch, 1956.
- “El despojo del Patrimonio Eclesiástico por las leyes desamortizadoras”, *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, VIII, 1956, pp.117-168.
- ALVAREZ JUNCO, José “A vueltas con la revolución burguesa”, en *Zona Abierta*, Núm. 36-37, 1985, pp.81-106.
- *Mater Dolorosa*,. 10ª edición, septiembre de 1997.
- “Identidad heredada y construcción nacional. El caso español del Antiguo Régimen a la revolución liberal”, *Historia y Política*, 1, 1999; FUSI, Juan *España. Evolución de la identidad nacional*, Madrid, Temas de Hoy, 2000.
- *La conformación de una identidad en Historia de España* Menéndez Pidal, Tomo XXXVI, Madrid, 2002.
- ALVAREZ LOPERA, José *Conocimiento e imagen de Velázquez en el XIX* en JUSTI, Carl *Velázquez y su siglo*. 1953/1999.
- ALVAREZ MARTI-AGUILAR, M. La antigüedad en la historiografía del siglo XVIII: El Marqués de Valdeflores, Málaga, 1966.
- ALVAREZ MORA, Alfonso La necesaria componente espacial en la Historia Urbana en SAMBRICIO, CARLOS, ed. *La Historia Urbana*, Ayer, 23, 1996.

- ALVAREZ, M. R. y FIORE, D., “La Arqueología como ciencia social: apuntes para un enfoque teórico-epistemológico”, *Boletín de Antropología Americana*, 27, julio, 1993.
- ALVAREZ ALONSO, Clara Las dos caras de Jano. Propiedad y constitución en el primer liberalismo español en ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo; TORIJANO PÉREZ, Salusitano de Dios de Dios; INFANTE MIGUEL MOTTA, Javier *Historia de la propiedad en España, siglos XV-XX*, Salamanca, 3-6 de junio de 1998.
- ALVAREZ MARRÍ-AGUILAR, Manuel *La antigüedad en la Historiografía española del siglo XVIII: El marqués de Valdeflores* Textos mínimos, Universidad de Málaga, 1966.
- ALLIBRANDI Y FERRI, *I Beni Culturali e Ambientale*, GiuffrèEditore., 1985.
- ALVAREZ LOPERA, J. “La Alhambra entre la Conservación y la Restauración (1905-1915)” *Cuadernos de Arte* de la Universidad de Granada. Granada, 1977.
- AMADOR DE LOS RÍOS, José, *Sevilla pintoresca, o descripción de sus más célebres monumentos*, Sevilla, Extramuros, 1844/2008.
- *Memoria comprensiva de los trabajos verificados por las Comisiones de Monumentos desde el 1º de julio de 1844 hasta igual fecha de 1845*, Imprenta Nacional, 1845.
  - *El arte latino bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar. Ensayo histórico-crítico*, Madrid, 1861.
- AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo *Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva*. Madrid, 1909; (ed.1998).
- “El Museo de Antigüedades Italicenses de la Excelentísima Señora Doña Regla Manjón, viuda de Sánchez Bedoya, en Sevilla” en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año XVI, septiembre-diciembre, 1912, pp.18-19.
  - “Notas arqueológicas. Antigüedades salvadas, perdidas y en peligro”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, T.33, Madrid, 1915, 1.
  - “El anfiteatro de Itálica. Noticias acerca de este monumento y de las excavaciones que en él, de orden del Gobierno se practican” en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año XXX, Julio-Agosto, 1916, Núm. 7 y 8.
- ANDALORO, María, *La Pinacoteca Capitolina nelSettecento: ordinamiento e conservazione*, Universitàdeglistudi e la Valorazzionedei Beni Storici e Artistici.
- ANDRADA PFEIFFER, R. *El Patrimonio Nacional, Legado de la Corona*, Acto de recepción de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 26 de junio de 1986; DIEZ MORENO, Fernando La consideración jurídico-constitucional del Patrimonio Nacional, en *Boletín Annabad*, XXXIX (1989), 1, pp.127-136.
- ANES, Gonzalo *Las colecciones reales y la fundación del Museo del Prado*, Fundación de Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1996.
- *La idea de España en el siglo de las Luces, España, reflexiones sobre el ser de España*, Real Academia de la Historia, Madrid, 1998.
- ANABITARTE, Alfredo “Sobre la propiedad: Observaciones históricos-dogmáticas y actuales” *Revista de Derecho urbanístico y Medio Ambiente*, 225, abril 2006.
- ANDRÉS-GALLEGO, J. La Legislación religiosa de la revolución española de 1868 (periodo constituyente), 1977, nº 33, pp.257-301.
- La evolución de los conceptos de propiedad y bien común en la España del siglo XVIII en *Haciendo Historia: Homenaje al profesor Carlos Seco*, Universidad Complutense, Universidad de Barcelona, 1989.
- ANES, Gonzalo *La idea de España en el siglo de las Luces, España, reflexiones sobre el ser de España*, Real Academia de la Historia, Madrid, 1998.
- ANES, Gonzalo y ALVAREZ DE CASTRILLON, *Economía, sociedad, Política y Cultura en la España de Isabel II*, Real Academia de la Historia, 2004.
- ANGUITA CANTERO, Ricardo “Las ordenanzas municipales como instrumento de control de la transformación urbana en la ciudad del siglo XIX, en *Cuadernos de Arte*, Nº XXIII, Universidad de Granada, 1992, pp.463-482.
- Reglamentación urbana en Granada durante el Antiguo Régimen: De la ciudad cristiana a la ciudad ilustrada” *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, Departamento de Arte, Nº XXIV, 1993, pp.151-156.
  - “La imposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre el Ayuntamiento del Antiguo Régimen: Las ordenanzas de Cádiz de 1792 y la pugna ilustrada por la titulación de maestro de obras” *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, NºXXVI, 1995, pp.411-422.

- “La concepción teórica de la idea de la ciudad en la ilustración española: La Policía urbana y los nuevos fundamentos del orden, comodidad y aspecto público” *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, Tomo XXVII; 1996.
- *Ordenanza y Policía Urbana. Los orígenes de la Reglamentación edificatoria en España (1750-1900)*. Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Granada, 1997.
- “Ruinas contra ruinas: norma estatal y práctica administrativa de la declaración de ruina en las reformas urbanas de la España liberal. Primeras experiencias de la Comisión de Ornato Público de Granada (1836-1844)” en ANGUITA CANTERO, Ricardo; HUETZ DE LEMPS, Normas y prácticas urbanísticas en ciudades españolas e hispanoamericanas (siglos XVIII-XXI), 2010, pp.157-199.
- ANGUITA VILLANUEVA, Luis. A. “¿Realmente existe el derecho de propiedad privada en los bienes culturales?” *Revista general de legislación y jurisprudencia*, nº 2, 2001, pp.247-270.
- “La protección jurídica de los bienes culturales en el derecho español”, *Ius et praxis*, Vol.10, Nº 1, 2004, pp.11-44.
- *El derecho de propiedad privada en los bienes de interés cultural*, Dikyson, Madrid, 2006.
- ANÓNIMO *Reales órdenes de la Reina Gobernadora D<sup>a</sup> María Cristina de Borbón (año 1836-1838) vedando la extracción a país extranjero de preciosos objetos artísticos e históricos* en Boletín de la Real Academia de la Historia, 1907.
- ANTEQUERA, José María *La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones*, Madrid, Analecta Editorial, 1885-2003.
- ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO, M<sup>a</sup> Dolores “Consecuencias de la desamortización de José Bonaparte en el patrimonio artístico de los conventos madrileños” en *Desamortización y Hacienda Pública*, Vol.2, 1986, pp.259-272.
- “La desamortización de José Bonaparte y el patrimonio artístico madrileño” AGUIRRE GONZÁLEZ DE DURANA Homenaje a Justo García Morales, 1987, pp.705-722.
- “Un pleito artístico: Granada y el Museo Josefino” en *Espacio, Tiempo y Forma*. Revista de la Facultad de Geografía e Historia, 2, 1988.
- “Arte y coleccionismo en Burgos durante la ocupación francesa” *Espacio, Tiempo y Forma*, 2, 1989, pp.329-342.
- “Colección y protección del patrimonio: Aproximación a los antecedentes legislativos sobre prohibición de exportar obras de arte” *Los clasicismos en el arte español*, Actas del Congreso del CEHA, Universidad Nacional de Educación a distancia, 1994, pp.391-396.
- “El Museo de la Trinidad, germen del museo público en España” *Espacio, Tiempo y Forma*, Madrid, Serie VII, Tomo II, 1998, pp.392 y ss.
- “José Bonaparte y el arte”, en ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso Jesús, *la Nación recobrada: La España de 1808 y Castilla y León*, 2008, pp.67-82.
- “Del saqueo del patrimonio al patrimonio nacional” en María Dolores en RAMOS SANTANA, Alberto; ROMERO FERRER, Alberto, *Liberty, Liberté, Libertad: el mundo hispano en la era de las revoluciones* (eds.), Cádiz, Universidad de Cádiz, 2010.
- “José Bonaparte y el patrimonio: Entre la gestión y el expolio” en VIGUERA RUIZ, Rebeca, *Dos siglos de Historia: actualidad y debate histórico en torno a la Guerra de la Independencia (1808-1814)*.
- “Coleccionismo, museos y mercado artístico”, un debate actual en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO (DIRECTORA), *Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en España en los siglos XVIII y XIX*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011.
- *Frédéric Quilliet y el descubrimiento del patrimonio andaluz, el viaje andaluz del rey José I*, Madrid, Lunweg, Ministerio de Defensa, 2011, pp.37-51.
- ANTIGÜEDAD, M<sup>a</sup> Dolores; AZNAR, Sagrario *El siglo XIX. El cauce de la memoria*. Istmo, colección Fundamento, 131, Madrid, 1998.

- ANTON ONECA, J. "Historia del Código Penal de 1822" en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, Tomo XVIII, 1965.
- APARICIO PEREZ, José; HIS CATALA, Alfredo *Las raíces de Cullera: prehistoria y protohistoria El Museo Arqueológico*. Departamento de Historia Antigua. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valencia, Sección Arqueológica, Núm.3. Valencia, 1977.
- ARAUJO SANCHEZ C. "Los Museos provinciales de España" *Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica*, 1868, pp.353-357.
- ARIAS EIBE, Manuel José *El Patrimonio Cultural. La nueva protección en los artículos 321 a 324 del Código Penal de 1995*. Estudios de Derecho Penal, Editorial Comares, Granada, 2001; GUIASOLA LERMA, Cristina *Delitos contra el Patrimonio Cultural: Artículos 321 al 324 del Código Penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.
- ARBETETA MIRA, Letizia *El tesoro del Delfín. Alhajas de Felipe V recibidas por herencia de su padre Luís, Gran Delfín de Francia*, Museo Nacional del Prado,
- ARCE, J. y OLMOS *Historiografía de la Arqueología y la Historia Antigua en España (siglos XVIII-XX)*. Madrid, 1998.
- ARJONES, A. La génesis de los valores de los monumentos, en SCARROCCHIA, S. (ed.) *Actas del Congreso Internacional de la Academia de Brera para el Centenario Riegliano*, Brera, Accademia di Belli Arti di Brera, junio, 2006.
- ARGAN, Carlos *El pasado en el presente. El revival en las artes plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro*. Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
- *La Historia del Arte como historia de la ciudad Barcelona*, Laia, 1984.
- ARGULLOL, Rafael *Tres miradas sobre el arte Barcelona*, 1985.
- ARIAS EIBE, Manuel José "El patrimonio cultural. La nueva protección en los arts. 321 a 324 del Código Penal de 1995" *Estudios de Derecho Penal* Editorial Comares, Granada, 2001.
- ARTOLA GALLEGO, M. *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*, Tomo 5 de la Historia de España dirigida por Miguel Artola. Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- ARTOLA, M. y otros *El latifundio*, Madrid, 1978.
- ARRAZOLA, Lorenzo *Enciclopedia Española de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias*, Madrid, Imprenta de la Revista de la legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1858.
- ARRIBAS, F. "Datos y documentos sobre arte procedentes del Archivo General de Simancas: Hallazgos arqueológicos en el siglo XVIII", *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, XVI, Valladolid
- *La protección al patrimonio artístico nacional en el siglo XVIII* en BSAA, VI (1939-1940), pp.237-238.
- ASSUNTO, R. *La antigüedad como futuro. Estudio sobre la estética del neoclasicismo europeo*, Madrid, Visor, 1990.
- AZCARATE, *Historia de la propiedad y su estado actual en Europa*, 1879.
- AZCUE BREA, Leticia "La circulación ilícita de Bienes Culturales", Museos. *EsRevista de Subdirección General de Museos Estatales*, N° O, 2004.
- "El origen de las colecciones de esculturas del Museo del Prado" *Taller Europeo: Intercambios, Influjos, y préstamos en la escultura moderna europea*, Museo Nacional de Escultura, Valladolid, 2012, pp.73-110.
- AZNAR GIL, Federico R. Propiedad y fines del Patrimonio cultural de la Iglesia Católica, *Estudio en Homenaje al Profesor Martínez Valls*, Volumen 1, 2000, pp.51-63.
- AZÚA, F. de *Diccionario de las artes*, Planeta, Barcelona, 1995
- BABELON, Jean Pierre; CHASTEL, André "La noción de patrimonio" *Revue de L'Art* 49, París, 1980.
- BADENES CASINO, Margarita, *La protección de los bienes culturales durante los conflictos armados*, Universidad de Valencia, Valencia, 2005.
- BAENA DE ALCAZAR, Mariano Prólogo en José María García Madaira: *Estructura de la Administración central (1808-1931)*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1982.



- BAHAMONDE, A. Crisis de la nobleza de cuna y consolidación burguesa (1840-1880), BAHOMONDE A. y OTERO, *Madrid en la sociedad del siglo XIX*, Vol. I, 1986.
- BAHAMONDE, Ángel y TORO, Julián *El sexenio democrático 1868-1874* en Historia de España, Madrid, Historia 16, 1986, pp. 867-868.
- BAHOMONDE, Ángel; MARTINEZ, Jesús A. *Historia de España. Siglo XIX*. Madrid, 1998.
- BAHOMONDE MAGRO, A; TORO MEDINA, J. *Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX*. Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1978.
- BAJO FERNANDEZ, M.; PEREZ MANZANO, M. *Manual de Derecho Penal Especial. Delitos Patrimoniales y Económicos*.
- BALLART, J. *El patrimonio histórico y arqueológico: Valor y uso*. Barcelona, 2002.
- BALLART HERNÁNDEZ, Joseph; TRESSERRAS, Jordi Juan *Gestión del patrimonio cultural*. Barcelona, 2001.
- BALMASEDA MUNCHARAZ, Luis J. “La reclamación diplomática del Tesoro de Guarrazar”, *Boletín de la ANABAD*, Tomo 45, Nº 1, 1995, pp.165-176.
- “El tesoro perdido de Guarrazar”, *Archivo Español de Arqueología*, 68, Nº171-172, 1995, pp.149-164.
- “Las versiones del hallazgo del tesoro de Guarrazar” *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, Tomo 14, Nº 1-2, 1996, pp.95-110.
- El modelo de Guarrazar: Real Academia de la Historia y presidiarios de una excavación decimonónica en MORA, Gloria; DIAZ-ANDREU, Margarita, *La cristalización del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*, Málaga, 1997, p.207-21
- BALSALOBRE GARCÍA, Juana María, Comisión de Monumentos, Alicante, desamortización y tiempo de colecciones, en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, Mª DOLORES, *Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en la España de los siglos XVIII y XIX*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp.145-165.
- BARCELLONA, Pietro *El individualismo propietario*, Editorial Trotta, Madrid, 1996.
- BARCELONA LLOP, Javier Reflexiones dispersas sobre el derecho de los bienes culturales. Historia de la propiedad. Patrimonio Cultural.
- “El dominio público arqueológico”, *Revista de Administración Pública*, 151, 2000.
- BARCELONA LLOP, Javier Patrimonio Cultural en GONZALEZ GARCÍA, Julio V. *Derecho de los Bienes Públicos*, Valencia, 2005
- BARNES VAZQUEZ, Javier *La propiedad constitucional. El estatuto jurídico del suelo agrario*. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Editorial Civitas, 1988.
- *La propiedad constitucional. El estatuto jurídico del suelo agrario*, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 1988.
- BARÓ PAZOS, Juan *La codificación del Derecho Civil en España (1808-1889)*, Santander, Universidad de Cantabria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1992, pp.67-69.
- BARRANCO VELA, Rafael *El régimen jurídico de la Restauración en el Patrimonio Cultural. Un estudio comparado de los ordenamientos italiano y español*. Estudios sobre el Derecho a la Cultura y Régimen Jurídico del Patrimonio Cultural. Granada, 2008.
- BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción *La ordenación jurídica del Patrimonio Histórico* Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla, 1990.
- BARRIO MOYA, José Luis “Un coleccionista atípico: Don Guillermo Joaquín de Osma” *Goya*, 267, Madrid, 1998, pp.364-365.
- BARRIL VICENTE, Magdalena, “Anticuarios, arqueólogos, conservadores de Museos, Museólogos o Técnicos de Museos: el paso del tiempo”, *Boletín de la ANABAD*, Tomo 49, Nº 2, 1999, pp.205-236.
- BARRIO GOZALO, Maximiliano “La Propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen”, en DE DIOS, Salustiano; INFANTES, Javier; ROBLEDO, Ricardo; TORRIJANO, Eugenia (Coords.) *Historia de la propiedad en España Siglos XV-XX*, Centro de Estudios Registrales, Salamanca, 3-6 de junio de 1998.



- BARRIO MOYA, José Luis “Un coleccionista atípico: Don Guillermo Joaquín de Osma”  
*Goya*, 267, Madrid, 1998, pp.364-365.
- BARTOLOMÉ MARTINEZ, Bernabé “Las librerías e imprentas de los jesuitas (1540-1767)”*Hispania Sacra: Revista de la Historia Eclesiástica de España*, Vol.40 (enero-junio 1988), pp.315-388.
- BARROS CANEDA, José Ramón, Incidencias de la desamortización de 1820 en el patrimonio artístico mueble de El Puerto de Santa María *Historia del Arte y Bienes Culturales*, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Editorial Comares, Junta de Andalucía, Sevilla, 1998.
- BASSOLS COMA, Martín *Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1812-1956)*. Madrid, 1973.
- “El patrimonio histórico español. Aspecto de su régimen jurídico”*Revista de Administración Pública*, n.114, 1987, pp.93-126.
  - “Los inicios del derecho urbanístico en el periodo del liberalismo moderado y el sexenio revolucionario (1846-1876): el Ensanche de la ciudad como modelo urbanístico y sistema jurídico”*Ciudad y Territorio. Estudios territoriales*, XXVIII, 1996,nº 107-108, Nº especial: Siglo y medio de urbanismo en España, pp.19-52.
  - “El derecho urbanístico de la Restauración a la II República (1876-1936): crisis de los Ensanches y las dificultades para alumbrar un nuevo modelo jurídico urbanístico”*Ciudad y Territorio. Estudios territoriales*, XXVIII, 1996, pp.53-90.
  - *Constitución y sistema económico*. Temas clave de la Constitución española, Madrid, 1998.
- BAZIN, G. *El tiempo de los museos*, Madrid, 1969.
- BÉDAT, Claude *La Real Academia de San Fernando (1744-1808): contribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1989.
- BELLESCIZE, Diane de Del’ancienne á la nouvellelégislation sur la protection du patrimoine architectural et des sites: Les Zones du Patrimoine Architectural et Urbain en *Revue de Droit Public* 1986.
- BELTRAN, José Rasgos más destacados del régimen jurídico de las propiedades de la Iglesia Católica, *Jus*, 35, 1962.
- La escultura clásica en el coleccionismo erudito de Andalucía (siglos XVII-XVIII) en *Actas del Simposio sobre el coleccionismo de la escultura clásica en España*, Museo Nacional del Prado, 21 y 22 de mayo de 2001.
  - “Historia de la Arqueología en España. Precedentes y líneas actuales de investigación”, *Revista de Historiografía*, 1, Madrid, 2004.
- BELTRAN FORTES, José “La colección arqueológica de “la casa de Lebrija” en Sevilla: La Condesa Regla Manjón (1851-1938) e Itálica en los inicios del siglo XX” en *Revista de los Museos de Andalucía* Año IV Nº 7. Diciembre 2006.
- “La arqueología en España durante la primea mitad del siglo XX. Apuntes sobre el marco institucional” en BELTRAN FORTES, José; HABIBI Mohammed, *Historia de la arqueología en el Norte de Marruecos durante el periodo del protectorado y sus referentes en España*, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2008, pp.20-23.
- BELTRAN FORTES, José; CACCIOTI, Beatrice y PALMA BENETUCCI, Beatrice (editores), *Arqueología, Coleccionismo y Antigüedad. España e Italia en el siglo XIX*. Universidad de Sevilla, 2006.
- BELLO VOCES, J. *Frailles, intendentes y políticos: Los bienes nacionales, 1835-1850*, Madrid, Taurus Ediciones, 1997.
- *La nacionalización de los bienes de la Iglesia: ocupación y administración (1845-1850)* en *Estudios de la Hacienda: de Ensenada a Mon*, Madrid, 1984, pp.35-51.
- BENEVOLO, Leonardo *Historia de la arquitectura moderna*, Barcelona, 1999.
- BENSUSAN MARTÍN, María del Pilar, *La protección urbanística de los bienes inmuebles históricos*, Granada, Comares, 1996.
- BENITEZ DE LUGO Y GUILLEN, Félix, *El Patrimonio Cultural español. Aspectos jurídicos, administrativos y fiscales*, Granada, Comares, 2005.
- “La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales” *Patrimonio Cultural y Derecho*, 11, 2007.

- BENITEZ DE LUG, Enrique; SALAS ALVAREZ, Jesús “La protección legal del patrimonio histórico: estado actual de la legislación. *Revista de Arqueología*, Nº 162, 1994, pp.7-11.
- BERBERIÁN, E.E. *La protección jurídica del patrimonio arqueológico en la República Argentina*, Comechingonia, 1º ed (1992).
- BERLANGA PALOMO, Mª José “La Comisión de Monumentos de Málaga y su actuación en los descubrimientos arqueológicos motivados por los derribos de las murallas de la Alcazaba (1904-1906), *Baetica: estudios de arte, geografía e historia*, Nº22, 2000, pp265-288.
- “Algunas referencias sobre el concepto de Arqueología en España en el siglo XIX” en *Gerión*, 21, 2003, pp.379-394.
- *Arqueología y erudición en Málaga durante el siglo XIX*, Servicio de Publicaciones. Universidad de Málaga, 2005.
- “La enseñanza de la Arqueología en el siglo XIX: de las Cátedras de Castellanos de Losada a la introducción en los estudios universitarios” en *Anales de Arqueología Cordobesa*, Nº12, 2001, pp13-33.
- BERMEJO LOPEZ, María Belén “La legislación protectora del Patrimonio Histórico en el sistema federal austriaco” *Patrimonio Cultural y Derecho*, 4, 2000.
- BERMUDEZ, Alejandro, VIANNEY M. ARBELOA, Joan; GIRALT, Adelina, *Intervención en el Patrimonio Cultural. Creación y gestión de proyectos*. Madrid, 2004.
- BERNARD-GRIFFITHS, Simone *Révolution française et “vandalism révolutionnaire”*. Actes du colloque international de Clermont-Ferrand (15-17 diciembre de 1988).
- BERNARDES I POSTILS, Jaume La conservación preventiva: ¿Qué, cómo y por qué? en HIDALGO CUÑARRO, José Manuel *La conservación preventiva de bienes culturales*. Coloquio Internacional La conservación preventiva de bienes culturales. Vigo, 1996.
- BETEHENCOURT MASSIEU, A. de “El marqués de la Ensenada y la arqueología, hallazgos romanos en las obras de cimentación del arsenal de Cartagena (1750-1752)”, *Boletín de Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, XXIX, 1963, pp.73-87.
- BIANCHI BANDINELLI, R. *Introducción a la Arqueología*, Madrid, 1982.
- BIDAGOR, R. y BELTRAN FUSTERO, L. “Rasgos más sobresalientes del régimen jurídico de las propiedades de la Iglesia Católica” *Revista crítica del Derecho Inmobiliario*, num.408-409, 1962
- BIDAGOR, R. “Los sujetos del Patrimonio Eclesiástico y el iusemines de la Santa Sede en el Patrimonio Eclesiástico” *Estudios de la Tercera semana de Derecho canónico*, Salamanca, 1950.
- BLECH, Michel Las aportaciones de los arqueólogos alemanes a la arqueología española, en *Historiografía de la arqueología española, Las instituciones*, Madrid, Museo de San Isidro, 2002, pp.83-117.
- BOBBIO, Luigi (Ed.), *La política de ibeniculturali in Europa*, Il Mulino, Bolonia, 1992.
- BOLAÑOS, María “Ideales ilustrados, prácticas burguesas: La génesis intelectual del museo público” *Mus-A Año I*, Nº 2, julio 2003.
- *Historia de los Museos en España*, Gijón, Editorial Trea, 2008.
- BONFANTI, Ezio *Arquitectura para los centros históricos*, en AA.VV. *Arquitectura racional*, Madrid, 1979.
- BOBBIO, Norberto *Estado, Gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política*. Breviarios. Fondo de Cultura Económica, 487, México, 1994.
- BORJA, Jordi *Ciudadanía y espacio público en Foro. La Ciudad Humanizada 2002*. Cultura Urbana y Cultura Medioambiental. Sevilla, Signatura, 2003
- BOYER, Ferdinand, Les responsabilités de Napoleondans le transfert des ouvresd’art de l’étranger à París, *Revued’historiemoderne et contemporaine*, XI, 1964.
- Louis XVIII et la restitution des ouvresd’artconfisquéessous la Revolution et l’Empire, *Bulletin de la Société de l’histoire de l’artfrançais*, 1965
- BRANDI, Cesare *Teoría de la Restauración*, Alianza Forma, 1988.
- BRICHET, R. *Le regime des monumentshistoriques en France*, París, 1952.
- BROOKS, C. *The Gothic Revival*, London, Constable, 1950.
- BUHIGAS CABRERA, José Ignacio; PEREZ FERNANDEZ, Enrique, El marqués de la Cañada y su Gabinete de Antigüedades del siglo XVIII en el Puerto de Santa María en BELTRAN, Jose; GASCO, Fernando *La Antigüedad como argumento, historiografía e arqueología e Historia Antigua en Andalucía*, Sevilla, 1993, pp.205-211.
- BURDIEL, Isabel, ed. Isabel II: un perfil inacabado en BURDIEL, Isabel, ed. *la política en el reinado de Isabel II*, Ayer, 29, Madrid, 1998, pp.187-216.

- BURGOS Y MAZO, Manuel “La socialización del derecho”, *Revista de Legislación*, Tomo 127, Madrid, 1915 p.231-240.
- BURKE, Peter, *El Renacimiento Italiano*, Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- CABALLOS RUFINO, Antonio; MARIN FATUARTE, Jesús y RODRIGUEZ HIDALGO, José M., *Itálica arqueológica*. Sevilla, 1999.
- CABELLO CARRO, María Paz, “Los inicios de la museología en la Función Pública. La compleja historia de Florencio Janer (1831-1877)”, *Museo.Es, Revista de la Subdirección General de Museos Estatales*, Nº3, 2007, pp.162-175.
- CADIÑANOS BARDECI, Inocencio “Los claustros del monasterio de San Jerónimo el Real” *Goya*, Volumen LXXX Nº 319, julio-septiembre, 2007, Madrid, pp.255-257.
- CALAMA RODRIGUEZ, José Maria; GRACIANI, Amparo *La restauración decimonónica en España*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998.
- *La restauración monumental en España 1901-1920*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2000.
- CALATRAVA, Juan “El debate sobre la ubicación de los cementerios en la España de las luces: la contribución de Benito Bails”, en *Espacio, Tiempo y Forma Serie, VII, Historia del Arte*, 1991, nº 4.
- “La visión de la historia de la arquitectura española en las revistas románticas en VV.AA. Historiografía del Arte Español en los siglos XIX y XX”. Madrid, 22-25 de noviembre de 1994. *Actas de las VII Jornadas de Arte*, 53-62. Madrid, 1995.
- *Arquitectura y cultura en el siglo de las Luces*, Universidad de Granada, 1999.
- *Patrimonio Arquitectónico e historia de la arquitectura*, GONZÁLEZ ALCANTUD (Ed.) Patrimonio y pluralidad: nuevas direcciones en antropología, 2003.
- *Estudios sobre historiografía de la arquitectura*. Granada, 2005.
- “La arquitectura, el urbanismo y las obras públicas en la prensa de la España Napoleónica” *Estudios sobre historiografía de la arquitectura*. Universidad de Granada, 2005.
- CALVO, Ignacio “Termes, ciudad celtíbero-arevaca” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tercera Época, Año XVII, Tomo XXIX, julio a diciembre de 1913, Madrid, 1914, pp.374-375.
- CALVO SANCHEZ, María Jesús *Crecimiento y estructura urbana de San Sebastián*. San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1983.
- CALVO SERRALLER, F. *Los viajeros románticos franceses y el mito de España*, en VV. AA. *Imagen Romántica de España. Introducción*, Madrid, Dirección de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1981, pp.19-27.
- *La imagen romántica de España: arte y arquitectura del siglo XIX*, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
- Las academias artísticas en España en N. PEVSNER: *Las academias de arte*, Madrid, 1982, pp. 209-239.
- Museo público y mecenazgo en *Mecenazgo y conservación del patrimonio artístico: reflexiones sobre el caso español.*, Madrid, Fundación Argentaria, 1995, pp.25-34.
- Orígenes y desarrollo de un género: la crítica de Arte, en BOZAL, V., *Historia de las ideas estéticas y de las teorías estéticas contemporáneas*, Madrid, Visor, 1996.
- CALVO Y CABRE, *Excavaciones de la cueva del Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)*, Madrid, 1917.
- CALLAHAN, William J. *Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874*, Madrid, Cátedra, 1989.
- CAMARA, Eugenio de *Resúmenes y tareas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando durante los años 1868-1869*. Madrid, Imprenta Manuel Tello, 1866.
- CAMBRONERO, Carlos “La Reina gobernadora. Crónicas políticas de 1833 a 1840” *España Moderna*, Año 26, Núm.312, Madrid, Diciembre 1914.
- CAMINAL, Miquel *Dimensiones del nacionalismo* en Fernando Quesada, *Ciudad y ciudadanía: senderos contemporáneos de la filosofía política*. Madrid, Editorial Trotta, 2008.
- CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA, OSA, F. Javier Textos legales de las desamortizaciones eclesiásticas españolas y con ellas relacionadas, *La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España*, Real Centro Universitario Escorial, Simposium, 2007.

- CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, M<sup>a</sup> Dolores, “El convento de San Marcos de León después de la desamortización”, *Tierras de León: Revista de la Diputación Provincial*, Vol.37, N.105-106, 1998, pp.119-132.
- CANO DE GARDOQUI GARCIA, José Luis *Tesoros y colecciones. Orígenes y evolución del coleccionismo artístico*. Universidad de Valladolid, 2001.
- CANO RIVERO, Ignacio “Ver para aprender. La primera Galería Pública de Sevilla en el Alcázar (1770-1807). Aires Ilustrados en Sevilla” *MUS-A* Año I, N°01, febrero, 2003.
- CANOVAS SANCHEZ, F. *El partido moderado*, Madrid, 1982; *El moderantismo y la Constitución española de 1845*, Madrid, 1985.
- CANTO, A. “Un precursor hispano del CIL en el siglo XVIII: el Marqués de Valdeflores” *Boletín de la Real Academia de la Historia*, CXCI, 1997, pp.499-516.  
- “El conde de Campomanes: arqueólogo y epigrafista”, *Boletín de la Real Academia de la Historia* 2001, pp. 25-53.
- CANTUCCI, Michele *La tutela giuridicadelle cose d’interesse artistico o storico*, Padua, 1953.  
- *Le cose d’interesse artistico e storico in giurisprudenza e dottrina*, Napoles, 1968.
- CAPITEL, Antonio *Metamorfosis de monumentos y teoría de la restauración* Madrid, Alianza, 2009.
- CARCEL ORTIZ, Vicente *Iglesia y Revolución en España, 1864-1874*, Pamplona, 1979.
- CARRANCHO HERRERO, M<sup>a</sup> Teresa, *La circulación de bienes culturales muebles*, Universidad de Burgos, 2001.
- CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús *Estudio Introductorio del Catálogo de Huelva de 1909*. Huelva, 1998.
- CARRIAZO, J. de M. “Correspondencia de Don Antonio Ponz con el Conde de Aguila” *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 13 Carta VII.
- CARRION GÚTIEZ, Manuel La B.N. hacia el año 2000, *Boletín de la ANABAD*, Vol. XXXVI, núm.1-2 (enero-junio, 1986), pp.143-166.
- CASADO IGLESIAS, E. *Estudios de Derecho Administrativo*. II. Administración económica y planificación. Administración especial. Madrid, 1984.
- CASADO RIGALT, Daniel *José Ramón Mélida (1856-1933) y la arqueología española*, Real Academia de la Historia, 2006.  
- “José Ramón Mélida, un arqueólogo entre dos estilos”, *Gerión*, Vol.24, N.1, 2006, pp.371-404.  
- “José Ramón Mélida, impulsor de la arqueología extremeña en el primer cuarto del siglo XX”, *Revista de Estudios Extremeños*, Vol.62, N.1, 2006, pp.11-84.  
- “José Ramón Mélida: un eslabón clave entre la arqueología decimonónica de corte artístico y las nuevas líneas de investigación del siglo XX”, *Revista de Historiografía*, N°5, 2006, pp.134-151.
- CASTILLO RUIZ, J. *Los bienes paleontológicos: Un patrimonio especial deficientemente definido y reglamentado por la Ley del Patrimonio Histórico-Español. Paleontología y sociedad*. Granada, 1992.  
- *El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural: concepto, legislación y metodología para su delimitación* Granada, Universidad de Granada, 1997.  
- “La valoración paisajística de la Alhambra en los libros de viajes y su reconocimiento tutelar en la declaración de ésta como Monumento Nacional en 1870”. *Cuadernos de La Alhambra*, Vol. 29-30. Granada, 1993-1994.
- CEBRIAN FERNANDEZ, Rosario *Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, 1748-1845, Catálogo e Índices*, Alicante, 2002.
- CEDILLO, El conde de “La ciudad de Toledo y las reformas urbanas” *Boletín de la Real Academia de la Historia*, Vol. LXVII, 1915, pp.243-250.
- CERVERA VERA, L. “Francisco Sabatini y sus normas para el saneamiento de Madrid”, *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, XI, 1975.  
- “La época de los Austrias”, en *Resumen histórico del urbanismo en España*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1987.  
- “Normas para las mejoras urbanas en el Madrid de Carlos III y algunas disposiciones precedentes” en AA.VV. *Carlos III Alcalde de Madrid*, Madrid, 1988.
- CERRILLO MARTÍN DE CACERES, Enrique “Patrimonio Arqueológico y Legislación. Un mosaico destruido, un pícaro y una sentencia en 1846. Mérida. Ciudad y Patrimonio” *Revista de Arqueología, Arte y Urbanismo*, Núm.5, 2001, pp.219-228.

- CIRUJANO, P., ELORRIAGA, T. y PEREZ GARZON, J. S. *Historiografía y nacionalismo español (1834-1868)*. Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1985.
- CLAVERO, Bartolomé *Mayorazgo: propiedad feudal en Castilla 1369-1836*. Madrid, Siglo Veintiuno, 1989.
- *La propiedad considerada como capital: en los orígenes doctrinales del Derecho actual español*
  - “Propiedad como libertad: la declaración del derecho de 1812”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, 60, 1990, pp.29-102.
  - Origen constitucional de la codificación civil en España (Entre Francia y Norteamérica) en PETTIT, Carlos (Coord.) *Derecho privado y revolución burguesa*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 1990.
  - Propiedades y propiedad, 1789: el derecho dominical en el momento revolucionario en ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo; TORIJANO PEREZ, Eugenia DE DIOS, Salustiano de Dios (coord.) Salamanca, 3-6 de junio de 1998, pp.243-296.
- CLAVERO, B., RUIZ TORRES, P. y HERNANDEZ MONTALBAN, FJ. *Estudios sobre la revolución burguesa en España*, Siglo XXI, Madrid, 1979.
- COCA PAYERA, Miguel, *Tanteo y retracto, Función Social de la Propiedad y Competencia Autónoma*, Bolonia, Real Colegio de España, 1988.
- COLINA GAREA, Rafael, *La función social de la propiedad privada en la constitución española de 1978*, J.M. Bosh Editor, Barcelona, 1997.
- COLMEIRO, *Derecho Administrativo*, Tomo II, 1865.
- COLOMER VIADEL, A. *El sistema político de la Constitución española de 1837*, Madrid, Tecnos, 1989.
- COLL, Fr. José *Colón y la Rábida* Madrid, 1892.
- COMELLAS, J.L. *Los moderados en el poder (1844-1854)*, Madrid, 1970
- CONDEMI, S. *La salvaguardia deibeniculturali: lineamenti di storiadella tutela*, Istituto per l’arte e il restauro palazzoSpinelli, Firenze, 1997
- CONGOST, Rosa *Tierra, Leyes, Historia. Estudio sobre la gran obra de la propiedad*. Editorial Crítica, Barcelona, 2007.
- CONTI, A. *storia del restauro e dellaconservazionedelle opere d’arte*. Ed. Electa, Milán, 1988.
- CORTESE Wanda, *Lezioni di legislazione deibeniculturali*, Cedam, 1997.
- *I beniculturali e ambientali*, Cedam, 2002.
  - *Il Patrimonio Culturale: profilinormativi*, Cedam, 2007.
- CORRAL, Carlos “El Patrimonio Cultural de la Iglesia”, *Revista de Fomento Social*, 40, 1985,



pp.431 y ss.

CORRAL SALVADOR, Carlos; DE LA HERA, Alberto “Bienes Culturales e Intereses Religiosos”, *Revista de Derecho Privado*, Nº 66, enero 1982, pp.419-440.

COSIALLS UBACH, Andrés Miguel *El régimen jurídico de la propiedad agraria sujeta a la nueva PAC*, 2009.

COULANGES, Fustel de *La ciudad antigua*, Editorial Edaf, Madrid, 1996.

CRESPO NOGUEIRA, Carmen “Los primeros cien años del Archivo Histórico Nacional” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, LXXIII, N.2, 1966, pp.285-319.

CRUCES, E. “Instituciones y organismos que han gestionado la Alhambra y el Generalife (siglos XIX y XX)” *Cuaderno de la Alhambra*, Vol. 35. Granada, 1999 pp.113-140.

CRUZADO VILLAAMAIL “Lo que ha hecho y lo que falta que hacer a la revolución, en el personal, y en la administración, y en la enseñanza de las Bellas Artes” *El Arte en España*, 1868, pp.244-245.

CUADRADO, José María “De vandalismo en arquitectura” *Semanario Pintoresco Español*, 47, 23/11/1851.

CUENCA TORIBIO, J.M., *La iglesia española ante la revolución liberal*, Madrid, 1961.

CHAMORRO, Victoria E., *La Alhambra, el lugar y el visitante*, Córdoba, Almuzara, 2006

CHARNEY Noach, *Los ladrones del Cordero Místico*, Ariel, septiembre de 2011

CHECA CREMADES, Fernando “Sobre distintas maneras de ver y poseer (La situación del objeto artístico en las sociedades del Antiguo Régimen)”, *Revista de Occidente*, nº 141, 1993.

- “Cuadros para el Rey, cuadros para el público” *Mecenazgo y conservación del patrimonio artístico: reflexiones sobre el caso español*, Madrid, Fundación argenteria, 1995, pp.17-24.

CHOAY, François, *L'Invention du patrimoine urbain ¿Quel patrimoine aujourd'hui?*, *Revista Científica Icomos. Ciudades Históricas*, ICOMOS-Xunta de Galicia, 1993.

- *Alegoría del patrimonio*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.L. 2005.

CHUECA GOITIA, F. *Breve historia del urbanismo*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

DANIEL, G., *Historia de la Arqueología. De los Anticuarios a Gordon Childen*, Alianza, Madrid, 1996.

DÁVILA, Alfonso *Los archivos del Estado. Que són y cómo se tratan.*, Gijón, Ediciones Trea 2010.

DE CABO MARTIN, Carlos, *Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución*. Editorial Trotta, Madrid, 2010.

DEDIEU, Jean-Pierre, El aparato del gobierno de la Monarquía española en el siglo XVIII, en PEREZ SRRIÓN, Guillermo (ed.) *Mas Estado y más Mercado, Absolutismo y Economía en la España del siglo XVIII*, Editorial Silex, Madrid, 2011.

DE DIOS DE DIOS, Salustiano “El Derecho y la Realidad Social: reflexiones en torno a la historia de las instituciones”, *Historia, Instituciones, Documentos*, Núm.3, 1976, pp.141-166.

DELENDIA, Odile “Las santas de Alonso Cano en la colección Soult” *Goya*, Núm.286 Enero-Febrero, 2002.

DE FRUTOS GONZÁLEZ, Esther *Arqueología y Museología: La génesis de los museos arqueológicos en MORA, Gloria; DIAZ ANDREU, Margarita (Coord.) La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*. Málaga, 1997.

DE LA BANDA, Antonio, *Las academias de Bellas Artes y el urbanismo sevillano en el siglo XIX*, Sevilla, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 1972.

DE LA CUESTA, José María “Aspectos jurídicos-civiles del tratamiento de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica española en la ley del Patrimonio Histórico del 25 de junio de 1985”, en *Revista Española de Derecho Canónico*, Vol.44, Núm.122, enero-junio de 1987.

DE LA FUENTE MONGE, Gregorio *Los revolucionarios del 1868: élite y poder en la España Liberal*. Marcial Pons, 2000.

- “El enfrentamiento entre clérigos y revolucionarios en torno a 1869”, en SERRANO, Rafael (ed.), *El Sexenio Democrático en Ayer*, 44, Madrid, 2001, pp.127-150.

DE LAS RIVAS, Juan Luis *La reutilización del espacio. Sobre las condiciones del proyecto en la ciudad histórica en REPRESA, Ignacio, Restauración Arquitectónica T.II*, Universidad de Valladolid, Vol.2, 1998.

- DEL AMO Y DE LA HERA, Mariano “Las excavaciones arqueológicas y los museos en la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 1933”, B. *Anabad*, XXXIII, 1983, núm.2, p.260.
- DEL ARCO TORRES, M.A. y PONS GONZALEZ, M. *Diccionario del Derecho Urbanístico*, Granada, 1998.
- DEL ARCO, Ángel, “Notas arqueológicas de la diócesis de Tarragona”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año VI, Noviembre de 1902, Núm. 11, p.370-390.
- DE LIÑÁN Y HEREDIA “Los mosaicos de Fernán Núñez”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, enero-junio 1907
- DE MIGUEL SANCHES, Noelia *Las Academias y su configuración jurídica*, Cedecs Derecho Administrativo, Barcelona, 1999.
- DE NIEVA, J.M. *Decretos de la reina doña Isabel II dados en su Real nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora*, Madrid, 1836, XXI.
- DE SALAS, Xavier, “*Compra para España de la Colección de antigüedades de Cristina de Suecia*”, *Archivo Español de Arte*, Vol. XIV, 1940-1941, p.242.
- DE SAMBRICIO, Valentín “El museo fernandino” *Archivo Español de Arte*, Tomo XV, Madrid, 1952, nº, 51, 53 y 54.
- DE SETA, Cesare; LE GOFF, Jacques *La ciudad y las murallas* Madrid, Editorial Cátedra, 1989.
- *La ciudad europea del siglo XV al siglo XX*, Istmo, Madrid, 2002.
- DE TERÁN, Fernando *Historia del urbanismo en España* Tomo III. Madrid, Cátedra, 1999.
- DESPOIS, E. *Vandalisme révolutionnaire. Fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la Convention*. París, 1868.
- DESVALLEES, André *Emergence et cheminement du mot patrimoine en Musées*, 208, París, 1995.
- DIAZ ANDREU, M. *Arte y Arqueología: la larga historia de una separación. Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*, CSCI, Madrid, 1995.
- La arqueología en España. Historia de una disciplina, en *Teoría e Historia de la Restauración*, 1997.
- Nación e internalización. La arqueología en España en las tres primeras décadas del siglo XX, en M.DIAZ ANDREU, y G. MORA (eds.), *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*, Málaga, 1997, p.408.
- DIAZ BALERDI  
, Ignacio *La memoria fragmentada. El museo y sus paradojas*. Ediciones Trea, Gijón, 2008.
- DIAZ FERREIROS, Juan “La Adoración de los Reyes de Hugo Van der Goes. De Monforte a Berlín”. *Boletín del Museo Provincial de Lugo*, N.6, 1993-1994, pp.87-89.
- DIAZ MORENO, Fernando “La consideración jurídica constitucional del Patrimonio Nacional”, B.*Anabad*, XXXIX, 1989, 1, pp.129-130.
- “La evolución constitucional del Patrimonio Nacional”, *Reales Sitios*, Madrid, 1989, Número Extraordinario, pp.15-30.
- DIAZ TORREJON, Francisco L. *Osuna Napoleónica (1810-1812) Una villa andaluza y su distrito durante la ocupación francesa*, Fundación Genesian, Sevilla, 2001.
- DIPPEL, Host *Constitucionalismo moderno*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009.
- DOMINGUEZ-FUENTES, Sophie, “Las dos subastas parisienses de la galería Salamanca (1867-1875)”, *Goya*, 295-296, julio-octubre, 2003, pp.305-310.
- “Pinturas que poseyó Don Luis en la colección del Patrimonio Nacional 1848-1850” *Goya, Revista de Arte*, Núm. 304, Madrid, 2005, pp.45-50.
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Ariel Historia, Barcelona, 1981.
- *Testamentos de reyes de España: Los Austria*, Madrid, 1982, Vol.5.
- DORADO, P. “Valor y función del Estado Madrid”, *Revista de Legislación*, Madrid, Imprenta de la Revista de la Legislación, 1908, N.109, pp.30-31.
- DUNCAN, Carol, *Rituales de civilización*, Murcia, Nausicaä, 2007.
- DUGUIT, León *Las transformaciones del Derecho Público y Privado*, Buenos Aires, Heliasta, 1975.
- DYSON, Stephen, L. *En busca del pasado clásico*, Madrid, Ariel, mayo, 2008.
- EARLE, Rebeca *La nacionalización del pasado precolombino durante el siglo XIX en*  
GONZALEZ STEPHAN, Beatriz; ANDERMAN, Jens (eds.) *Galerías del progreso:*

- museos, exposiciones y cultura visual en América Latina. Estudios Culturales, 1º edición: abril, 2006.
- GOOCH, G. P. *Historia e Historiadores en el siglo XIX*. México, 1977.
- ECO, Umberto ¿solo puede construirse el futuro sobre la memoria del pasado? en ¿por qué recordar? Foro Internacional Memoria e Historia, UNESCO, 25 de marzo, Barcelona, 1999.
- EGUIA RUIZ, Constancio Los jesuitas, proveedores de bibliotecas. Recuento de muchos expolios, *Razón y Fe*, 130, 1944, pp.235-258.
- ELORZA, Antonio *La ideología liberal en la Ilustración española*, Tecnos, Madrid, 1970.
- EMILIANI, Andrea, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela de ibeniartistici e culturalinegliantischistatiitaliani, 1571-1860*, Bolonia, Alfa, 1978.
- ENCISO RECIO, Luis Miguel *Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808)*. Editorial Gredos, Madrid, 1991.
- ESCRIBANO COLLADO, Pedro *La propiedad privada urbana*, Editorial Montecorvo, 1979.
- ESPADA BURGOS, Manuel URQUIJO GOITIA, Manuel Historia de España, Tomo 11, Guerra de la Independencia y época constitucional (1808-1898). Madrid, 1990.
- *La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Un Guadiana junto al Tiber*. Madrid, 2000.
- ESPIGADO TOCINO, Gloria *La primera República en Cádiz. Estructura social y comportamiento político en 1873*. Sevilla, Caja Provincial San Fernando de Sevilla, 1993.
- ESPIN, J. “El Alcázar de los Vélez, un monumento que nos quita”, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, 1904, pp.101-103 y 134-135.
- ESPINHA DA SILVEIRA, Luis “La desamortización en Portugal” en RUEDA, Germán La desamortización en la Península Ibérica en *Ayer*, 9, Madrid, 1993.
- ESRICHE, J. Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, Librería de la Señora viuda e hijos de D. Antonio Calleja, Madrid, 1847.
- ESTEBANEZ ALVAREZ, J. *Las ciudades, morfología y estructura*, Madrid, Síntesis, 1989.
- EYGOUT, Henri La protection des objets mobiliers d’art et d’histoire, Ed. Marcel Giard, París (Francia), 1922.
- FALCON MÁRQUEZ, Teodoro, “Inventarios artísticos sevillanos del siglo XVIII. Relación de obras artísticas” *Archivo Hispalense*, n.176, Diputación, Sevilla, 1974.
- “La Torre del Oro en el siglo XIX: Documentos inéditos” *Laboratorio de Arte*, N.6, Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993, pp.221-244.
- “El patrimonio artístico del I marqués de Loreto (1687-1772) y de la familia del Campo” *Laboratorio de Arte*, N.9, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, pp.287-302.
- El coleccionismo en Sevilla en el siglo XVIII, en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, Mª DOLORES, *Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en la España de los siglos XVIII y XIX*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp.41-64.
- FALLANI *Tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico della Chiesa in Italia*, 1974.
- FARIÑA TOJO, José “La protección de nuestras ciudades históricas: un análisis de su evolución”, *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, Nº 156, 1997, pp.79-102.
- *La evolución del patrimonio urbano. Instrumentos normativos*. Madrid, Akal, 2000.
- FERNANDEZ, Tomás-Ramón *Manuel de Derecho Urbanístico*, Publicaciones Abella, El Consultor, Madrid, 2000.
- FERNANDEZ ALBA, Antonio, *De varia restauratione: intervenciones en el patrimonio arquitectónico*, Madrid, Celeste, 1999.
- FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. Dinastía y comunidad política. El momento de la patria; la nación de los modernos. Incertidumbres de la nación en la España de Felipe V, en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., *Materia de España. Cultura política e identidad en la España moderna*, Marcial Pons, Madrid, 2007.
- FERNANDEZ ARENAS, José *Introducción a la conservación del Patrimonio y técnicas artísticas*, Barcelona, 1996.
- FERNANDEZ-BAJON, Mª Teresa “Disposiciones legislativas sobre política de archivos y bibliotecas en la España del siglo XIX”, *Documentación de la Ciencia de la Información*, núm.24, Madrid, 2001.
- *Políticas de Información y documentación en la España del siglo XIX*. Gijón, Trea, 2001.

- FERNANDEZ CANTON, José María “El patrimonio cultural de la Iglesia de España y los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede”, León, Centros de Estudios e Investigación “San Isidoro”, *Archivo Histórico Diocesano*. León, 1980.
- FERNÁNDEZ, Roberto, Notas para una introducción a la teoría y práctica restauradora en *Teoría e Historia de la Restauración*, en CLEMENTE, Carlos (Coord.) *Teoría e historia de la Restauración*, Instituto Español de Arquitectos, Universidad de Alcalá, Marzo, 1972.
- *La herencia histórica del Absolutismo Borbónico*, en PÉREZ SARRION, Guillermo, Mas Estado y más Mercado, Absolutismo y Economía en la España del siglo XVIII, Editorial Silex, Madrid, 2011.
- FERNANDEZ-FLORES Y DE FUNES, José Luis, *El derecho de los conflictos armados*, Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 2001.
- FERNANDEZ MURGA, F. “El Rey y Nápoles: las excavaciones arqueológicas” en AA.VV. *Carlos III y la Ilustración*, Madrid, 1988, pp.375-384.
- FERNANDEZ RAMOS, Severiano *El derecho de acceso a los documentos administrativos*, Monografías Jurídicas, Marcial Pons, Madrid, 1997.
- FERNANDEZ ROJAS, Matilde, *Patrimonio Artístico de los conventos masculinos desamortizados en Sevilla durante el siglo XIX: Benedictinos, Dominicos, Agustinos, Carmelitas y Basilijs*, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2008.
- *Patrimonio Artístico de los conventos masculinos desamortizados en Sevilla durante el siglo XIX: Trinitarios, Mercedarios, Jerónimos, Cartujos. Mínimos, Obregones, Menores y Filipenses*. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2009.
- FERNANDEZ SARASOLA, Ignacio El derecho de propiedad en la historia constitucional española, en VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín *Propiedad e Historia del Derecho*, Fundación Beneficentia et PeritiaUris, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2005.
- El pensamiento político de Jovellanos, Estudio preliminar a JOVELLANOS, *Obras Completas, XI, Escritos políticos*. Ayuntamiento de Gijón, Instituto Feijoo, KRK, 2006.
- FERNÁNDEZ, Roberto, *La herencia histórica del Absolutismo Borbónico*, en PÉREZ SARRION, Guillermo, Mas Estado y más Mercado, Absolutismo y Economía en la España del siglo XVIII, Editorial Silex, Madrid, 2011.
- FERNANDEZ Y FERNANDEZ-CUESTA, Paz, *Bibliotecas y personas. Hacia un nuevo enfoque en biblioteconomía*, Gijón, Ediciones Trea, 2005.
- FERNANDEZ LLANEZA, Carlos *Los pilares de Oviedo*, Oviedo, Septem Ediciones, Temas Asturianos, 2007.
- FERNANDEZ SEBASTIAN, Javier; FRANCISCO FUENTES, Juan (dirs.) *Diccionario político y social del siglo XIX español*, Madrid, 2002.
- FERRAJOLI, Luigi *Derechos y garantías*. Madrid, Editorial Trotta, 2009.
- FERRER BENIMELI, J.A. “Carlos III y la extinción de los jesuitas” *Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración*, Madrid, Vol. I, 1989, pp.239-259.
- FINZI, Roberto. Introducción, en TURGOT, *Le richesse, il progresso e la storia universale*. Turín: Einaudi, 1978.
- FIORAVANTI, Maurizio, *Constitución. De la Antigüedad a nuestros días*, Madrid, Trotta, 2001.
- *El Estado Moderno en Europa. Instituciones y derechos*, Madrid, Trotta, 2004.
- *Los Derechos Fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*. Madrid, Trotta, 2007.
- FITA COLOME, Fidel “El antiguo acueducto hispalense conocido con el nombre de los Caños de Carmona”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, V. LVIII, 1911, pp.518-522.
- FLORESCANO, Enrique *El patrimonio cultural de México*. Fondo de Cultura Económica, 1993.
- FOTANA, J. *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*, Barcelona, 1973,
- *La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820*. Barcelona, 1974.
- *La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833* Barcelona, 1983.
- La burguesía española entre la reforma y la revolución en Varios Autores, *Revueltas y revoluciones en la Historia*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990.
- FONTES MIGALLON, F. El consejo de Ministros en el reinado de Fernando VII, *Revista de Derecho de la Universidad Complutense*, 71, 1986, pp. 309-373.



- FRADERA, Josep María; MILAN, Jesús y GARCIA VALERA, Jesús Millán *Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad Civil, política y cultura*. Biblioteca Nueva. Universidad de Valencia. Madrid, 2000.
- FRAGA GONZALEZ, M.C. *Arquitectura mudéjar en la Baja Andalucía*. Santa Cruz de Tenerife, 1977.
- FRAGA IRIBARNE, María Luisa *Conventos femeninos desaparecidos: arquitectura religiosa perdida durante el siglo XIX en Sevilla*, Sevilla, Guadalquivir, 1993.
- FRANCO MATA, Angela Comisiones Científicas en España desde 1868 a 1875 en POUS Marcos, *De Gabinete a Museo. Tres siglos de historia*. Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Arqueológico Nacional, Abril-Mayo, 1993.
- FRANCO RUBIO, Gloria A. En los márgenes del Absolutismo Ilustrado: la emergencia de un nuevo orden político a finales del siglo XVIII, Ponencia presentada al Seminario Internacional *Monarquía, Corte y Poder en la España del siglo XVIII*, Almería, 11-13 de junio de 2007.
- Captar súbditos y crear ciudadanos. Doble objetivo de los amigos del país en el siglo XVIII, *Historia Social*, 64, 2009.
- FRANCOVICH, Riccardo; MANACORDA, Daniele (eds.), *Diccionario de Arqueología*, Crítica Arqueología.
- La arqueología medieval: entre la historia y la gestión del patrimonio, Granada, Universidad de Granada, 2008.
- FUENTES CAMACHO, Víctor *El tráfico ilícito internacional de bienes culturales (Perspectivas del Derecho Internacional Privado español)*, Ed. Beramat-Eurolex, Col. Estudios Internacionales, Madrid, 1998.
- FURIO, Viçens, *Sociología del arte*, Cátedra, Madrid, 2000.
- EGIDO, T. “Motines de España y proceso contra los jesuitas. La pesquisa reservada de 1766” *Estudios Agustiniano*, XI, Madrid, 1976.
- Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII *Historia de la Iglesia Española (siglos XVII-XVIII)*, T.IV, Madrid, 1979.
  - *Las causas gravísimas y secretas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III*, Madrid, 1994
  - La expulsión de los jesuitas en España *Historia de la Iglesia Española* T.IV, Madrid, 2000.
- GABARDON DE LA BANDA, José Fernando “La configuración del Patrimonio Arqueológico como Bien de dominio Público en el ordenamiento jurídico español” *Spal Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla*, Nº 17, 2008, pp.27-46.
- *Los opúsculos de Mateos Gago*, Sevilla, Ateneo de Sevilla, Sevilla, 2012 (en prensa).
- GALAN VIOQUE, Roberto, *Obras públicas de interés general*. Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2004.
- GALERA ANDREU, P. *La imagen romántica de la Alhambra* Madrid, 1992.
- GALLEGO ANABITARTE, A. “Los cuadros del Museo del Prado (I): Reflexiones históricas y dogmáticas-jurídicas con ocasión del artículo 132 (y 133.1) de la Constitución española de 1978” en *Administración y Constitución*, Estudios en Homenaje al Profesor Mesa Moles, Madrid, 1981, pp.227-310.
- GALLEGO ROCA, Javier *Renovación, restauración y recuperación arquitectónica y urbana: El caso de París*. Universidad de Granada, 2001.
- GANAU CASAS, Joan La protección de los monumentos arquitectónicos en España y Cataluña: 1844-1936: legislación, organización, inventario, Lérida, Universidad de Lérida, 1999.
- GARCIA COLMENARES, Pablo, Transformaciones urbanísticas e industriales en RUEDA, Germán La desamortización en la Península Ibérica, *Ayer*, 9, 1993.
- GARCIA DE ENTERRIA, E. “Consideraciones sobre una nueva legislación del patrimonio artístico, histórico y cultural” *Revista Española de Derecho Administrativo*, nº 39, 1983, pp.575-594.
- *Revolución Francesa y Administración contemporánea*. Madrid, Taurus, 2º edición, 1981.
- GARCIA EJARQUE, Luis “Los planes bibliotecarios de José Bonaparte” *Boletín de Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, Año N.8, Nº 27, 1992, pp.25-29.
- “Normativa para la elaboración de los Índices de Impresos en la Biblioteca Nacional. Reseña histórica” *Boletín de la Anabad*, Tomo 42, Nº1, 1992.



- La Real Librería Pública de Madrid bajo la breve gestión de su primer Bibliotecario Mayor, el sevillano Gabriel Álvarez de Toledo y Pellicer de Tovar, *De libros y Bibliotecas*. Universidad de Sevilla, 1994.
- *La Real Biblioteca de S.M. y su personal (1712-1836)*, Madrid, Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 1996.
- *Historia de la lectura pública en España*, Gijón, Trea, 2000.
- GARCIA-ESCUADERO, Piedad; PENDAS GARCIA, Benigno *El nuevo régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español*, Ministerio de Cultura, 1986.
- GARCIA FELGUERA, María de los Santos *La fortuna de Murillo (1682-1900)*. Sevilla, 1989.
- *Viajeros, eruditos y artistas. Los europeos ante la pintura española del siglo de Oro.*, Madrid, Alianza Forma, 1991.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier *Legislación sobre Patrimonio Histórico*, Madrid, Tecnos, 1987.
- "La protección judicial del Patrimonio Cultural. Nuevas cuestiones y nuevos sujetos a los diez años de la ley del Patrimonio Histórico Español", *Boletín de la Facultad de Derecho*, 8-9, 1995, pp.369-370.
- "La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)" *Revista Electrónica del Patrimonio Histórico*, 1, diciembre de 2007,
- GARCIA GARCÍA, Antonio, *Vitalidad y crisis en los espacios públicos de Sevilla.*, Sevilla, 2006.
- GARCIA GARCÍA, Carmen *El papel de la Historia en el sistema educativo español durante el siglo XIX (Microentornoafinamiento de las disciplinas históricas como saberes académicos)*. Universidad de Oviedo, 1992
- GARCIA GARCÍA, M<sup>a</sup> Jesús, *La conservación de los inmuebles históricos*, Madrid, Aranzadi, 2000.
- GARCIA GOMEZ, Francisco *El nacimiento de la modernidad. Conceptos de arte del siglo XIX*. Universidad de Málaga, Málaga, 2005.
- GARCIA GOYENA, Florencio *Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español*, Zaragoza, 1974.
- GARCIA GUERETA, Ricardo "Los mutiladores" en *Arquitectura*, N° 4, 1918, pp.89-93.
- GARCIA LOPEZ, Genero Luis, *La lectura como servicio público: análisis de la Administración pública en los orígenes del sistema bibliotecario*, Gijón, Trea, 2004.
- GARCIA MELERO, Enrique "Orígenes del control de los proyectos de obras públicas por la Academia de San Fernando (1768-1777)" *Espacio, Tiempo y Forma*, en Serie, VII, H° del Arte, T.11, 1988, p.287-342.
- "Realizaciones arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XVIII en los interiores de las catedrales góticas españolas" *Espacio, Tiempo y Forma*, Madrid, 1989.
- "Arquitectura y burocracia: el proceso del proyecto de la Comisión de Arquitectura de la Academia (1786-1800)" *Espacio, Tiempo y Forma*, T.IV, 1991.
- GARCIA PELAYO, Manuel *Las transformaciones del Estado contemporáneo* Alianza Universidad, Madrid, 1996.
- GARCIA SANCHEZ, José "La Real Academia de San Fernando y la Arqueología" *Academia Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Primer y segundo semestre de 2008, Número 106-107.
- GARNELO, Milagros, "Descripción de las pinturas murales que decoran la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria)", *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, Núm.32, Madrid, 1924, pp.96-109.
- GARRIDO, Antonio "Informe relativo a instancia de Los Amigos de Cuenca solicitando la declaración de Monumento Nacional para dicha ciudad, o en su defecto la aplicación de los preceptos de la ley de 7 de julio de 1911 a la parte vieja y antiguas iglesias que cita" *Boletín de la Real Academia de San Fernando*, Segunda Epoca, Madrid, Núm.73, 31 de marzo de 1925, pp.44-45.
- GAVILÁ, Salvador "De la idea de la propiedad" *Revista de Legislación y Jurisprudencia*, Año XIII, Tomo XXVII, Madrid, 1865.
- GAYA NUÑO, J.A. - El Museo Nacional de la Trinidad (Historia y catálogo de una pinacoteca desaparecida) *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, T.LV, 1947
- *Catálogo de las obras de Zurbarán*, Barcelona, Aedos, 1948.
- *La pintura española fuera de España (Historia y Catálogo)*, Madrid, 1958.
- *Historia del Museo del Prado (1819-1969)*, Editorial Everest, Madrid, 1969.

- GESTOSO, José *Biografía del pintor Juan Valdés Leal*, Sevilla, 1918.
- GIANNI, Máximo Severo, *El poder público. Estados y administraciones públicas*. Civitas, Madrid, 1991.
- GIERKE, O., *La función social del derecho privado*, B. Scaevola, Madrid, 1904.
- GILLY, Adolfo, *Historia y poder*, en Nexos (México), nº 34, octubre, 1980.
- GIMENEZ LOPEZ, E. *Expulsión y exilio de los jesuitas españoles*, Alicante, 1997;
- José Moñino y la extinción de la Compañía de Jesús Catálogo de la Exposición *Floridablanca 1728-1808 La utopía reformadora*. Murcia 18 septiembre/8 de diciembre de 2008, pp.73-83.
- GIRON, C. “El pleito del Generalife, el proceso del Estado Español contra la Casa de Campotejar. Estudio Histórico-científico de un proceso civil”. *Cuadernos de la Alhambra*, Vol.35. Granada, 1999, pp. 93-112.
- GIL CREMADES, Juan José; NAGORE LAIN, Juan José; SEOANE VACAS, Coral; VICENTE Y GUERRERO, Guillermo en *La configuración jurídica del Estado Liberal en España*. Actas del Congreso en Conmemoración del segundo centenario de D. Alejandro Oliván (1796-1996).
- GOETHE, Johann Wolfgang *Viajes italianos*, en Obras Completas, T.III., 4º edic, Madrid, 1987.
- GOBERNA, Mª Victoria “Los estudios de Prehistoria durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX”. *La obra de Luis Sireten OLMEDO*, Fernando (Coord.), Homenaje a Luis Siret. junio, 1984,
- GOMBRICH, Ernest “¿porqué conservar los edificios históricos?” *Composición arquitectónica*, 2 de febrero de 1989.
- GOMEZ HERNANDEZ, José A. “La preocupación por la lectura pública en España: Las Bibliotecas Populares. De la Corte de Cádiz al Plan de Bibliotecas de María Moliner” *Revista General de Información y Documentación*, 1993.
- GOMEZ DE LA SERNA, Pedro; MONTALBAN, Juan Manuel *Elementos del Derecho civil y penal de España*, 4º edición, Madrid, 1851 (1º edición, 1841).
- GOMEZ DE LA SERNA, G. *Los viajeros de la Ilustración* Madrid, 1974.
- GOMEZ MENDOZA, Josefina, *Urbanismo e ingeniería en el siglo XIX. Reforma e interior de las ciudades y movilidad*. Discurso de 21 de marzo de 2006 se recepción en la Real Academia de Ingeniería, Madrid, MMVI.
- “La Junta para ampliación de Estudios y la Academia de Historia” en GOMEZ MENDOZA, Josefina (ed.) *La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y los académicos de la Historia*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2008.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel *Guía de Granada*. Granada, Universidad de Granada, 1982, p.429.
- *Breve reseña de los Monumentos y Obras de arte que ha perdido Granada en lo que va de siglo*. Granada, 1884.
  - *Arquetas hispano-árabes*, Madrid, 1912, pp.53-65.
- GOMEZ NAVARRO, José Luis *El régimen de Primo de Rivera*, Madrid, 1991.
- GOMEZ OCHOA, Félix, *El conservadurismo español y el italiano durante la formación del Estado Liberal, 1848.1876. Un análisis comparado del partido moderado y la DestraStórica*, en CASMIRRI, Silvana; SUAREZ CORTINA, Manuel, *La Europa del Sur en la época liberal. España, Italia y Portugal. Una perspectiva comparada*. Universidad de Cantabria, Università di Cassino, 1998.
- GOMEZ YMAZ, Manuel *El príncipe de la Paz, la Santa Caridad de Sevilla y los cuadros de Murillo, Estudio de erudición española. Homenaje a Menéndez y Pelayo*, Madrid, 1988, 2. Vol. I, pp.807-827.
- *Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno Intruso en Sevilla en el año 1810*, 1896/2009.
- GONZALEZ CALLEJAS, Eduardo *La España de Primo de Ribera. La modernización autoritaria 1923-1930*. Alianza Editorial, Madrid, 2005.
- GONZALEZ CASTAÑEDA, Teodosio “La revolución de 1868 en 110 municipios españoles (Proceso de formación de las Juntas Revolucionarias desde el 19 de septiembre hasta el 31 de octubre)” *Revista de Historia Contemporánea*, 3, 1984, pp.55-85.
- GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix *Diario de las ocurrencias públicas y sucesos históricos y curiosos, ordinarios y extraordinarios, así eclesiásticos, religiosos y sagrados, como seculares, políticos y profanos, acaecidos en esta ciudad de Sevilla en todos y cada uno de los días de 1800, en que da comienzos, y se prolonga hasta 1847*.

- GONZALEZ GARCIA, Julio V. *La facultad exclusiva del propietario* Granada, 1986.
- *La titularidad de los bienes de dominio público*, Marcial Pons, Monografías Jurídicas, 1998.
- GONZALEZ HURTEBISE, Eduardo “Descubrimiento de una antigua necrópolis en San Feliu de Gixols” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tercera Epoca, Año IX, julio a diciembre de 1905, pp.218-220.
- GONZALEZ MORENO, Beatriz “Fundamento constitucional de la acción promocional del Estado sobre los bienes culturales de interés religioso” *Patrimonio Cultural y Derecho*, 7, Madrid, 2003.
- GONZALEZ RUIZ Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX *Revista Española de Derecho Canónico* Tomo I, num.2, 1946, pp.383-424.
- GONZALEZ SANTOS, J. *Jovellanos (1744-1811), aficionado y coleccionista*, Gijón, 1994.
- GONZÁLEZ-UBEDA RICO, Gloria *Aspectos jurídicos de la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural* Cultura y Comunicación, 17, Ministerio de Cultura, Madrid, 1981.
- GONZALEZ VARAS, I. Santiago - *La Catedral de León. Historia y restauración (1859-1901)*. León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 1993.
- *Restauración arquitectónica en España durante el siglo XIX: Teoría, fuentes e ideología*, Valladolid Ambito, 1996.
- *La rehabilitación urbanística*, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1998.
- “Régimen jurídico de la estética en el Derecho Urbanístico”, *Patrimonio Cultural y Derecho*, 3, 1999.
- *Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas*. Madrid, 2000.
- GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, Ignacio *La Catedral de Sevilla (1881-1900) El debate sobre la restauración monumental*, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla 1994.
- GOOCH, G. P. *Historia e Historiadores en el siglo XIX*. México, 1977; LEFEBVRE, G. *El nacimiento de la historiografía moderna*. Barcelona, 1974.
- GORDO, Luis J. “Concurrencia de poderes en los espacios públicos en el Renacimiento” *Anales de Historia de Arte*, Universidad Complutense de Madrid, Volumen 12, Madrid, 2002.
- GOROSABEL, Pablo *Redacción del Código Civil de España, esparcido en los diferentes cuerpos de derecho y leyes sueltas de nuestra Nación, escrito bajo el método de los códigos modernos*, Imprenta de la Viuda de la Lama, Tolosa, 1832.
- GRACIA ALONSO, Francisco; CORTADELLA, Jordi “La institucionalización de la arqueología en Cataluña: El Server D’InvestigacionsArqueològiques del InstitutD’EstudisCatalans” en DEAMOS, María Belén; BELTRAN FORTES, José (editores) *Las instituciones en el origen y desarrollo de la arqueología en España. Spal Monografías*, X. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007.
- GRAHIT Y GRAU, Jorge *Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Barcelona: memoria de la labor realizada por la misma en su primer siglo de su existencia (1844-1944)*. Barcelona, 1947.
- GREENE, Christopher M. Alexandre Lenoir and The Musée des monuments français during the French Revolution, *French Historical Studies*, Vol.12, N.2. 1981.
- GUARDANS VALLÉS, Ramón “Origen y vicisitudes de la Colección Cambó”, en *Colección Cambo*, 1991, pp.51-52.
- GUICHOT, Joaquín *Historia del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla* Sevilla, 1896-1897. 4 Vol.
- GUISASOLA LERMA, Cristina *Delitos contra el Patrimonio Cultural: Artículos 321 al 324 del Código Penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.
- GULLON Y DIEZ PICAZO, *Sistema de Derecho Civil*, Tomo III. Madrid, 1990.
- GUTIERREZ BURON, J. *Exposiciones nacionales de Pintura en España en el siglo XIX*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1987.
- El cambio de clientes en el siglo XIX: el arte como mercado. Consecuencias, en *Actas del VII Congreso del C.E.H.A.*, Mesa I, Murcia, 1988.
- HABERMAS, Jürgen “¿Tiene futuro el Estado nacional?”, en *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*. Paidós. Barcelona, 1999.
- HAWTHORNE Nathaniel, *Musgos de una vieja casa parroquial*, Barcelona, Acantilado, 2009.
- HASKEL, Francis *Patrones y pintores. Arte y sociedad en la Italia barroca*, Cátedra. Madrid, 1984.
- HARVEY, Edwin R. *La política cultural en Argentina. Políticas culturales: estudios y documentos*. Unesco, 1977.
- *Legislación cultural en los países americanos*. Depalma, 1980.

- *Legislación cultural andina*, T. II, Bolivia, Convenio Andrés Bello, Bogotá, 1981.
- Protección del Patrimonio Cultural en la legislación de América Latina en *Patrimonio Cultural y Derecho*, 1, 1997.
- HAUSKELLER, Michael *¿Qué es el arte? Posiciones de la estética desde Platón a Danto*. Colección Tábano. 1ª edición: Marzo de 2008.
- HEGEL, F., *La constitución de Alemania*, Madrid, 1972.
- HEGEL, G.W.F. *La arquitectura*
- HEMPEL LIPSCHUTZ, Ilse *El despojo de las obras de arte en España durante la Guerra de la Independencia* en *Arte Español*, 1961.
- HENARES CUELLAR, Ignacio *La Historia del Arte como instrumento operativo en la gestión y protección del Patrimonio Histórico en Centros Históricos y Conservación del Patrimonio*. Madrid, 1998.
- HERMOSILLA, Ignacio de Noticias de las ruinas de Talavera, la vieja leída en la Academia de 2 de julio de 1762, *Memorias de la Real Academia de la Historia*, I, 1796.
- HENARES CUELLAR, Ignacio HENARES CUELLAR, I. *La teoría de las artes plásticas en España en la segunda mitad del siglo XVIII*. Granada, 1977.
- Conocimiento histórico y tutela en *Historia del Arte y Bienes Culturales*, Cuadernos, Instituto Andaluz del Patrimonio, 1998.
- HENARES, I. y J. CALATRAVA *El historicismo romántico* en Romanticismo y Teoría del Arte en España. Madrid, 1995.
- HERNANDEZ FRANCO, Juan Regalismo y reformismo al servicio de la Monarquía de Carlos III: José Moñino durante sus años como fiscal del Consejo de Castilla (1766-1772), Catálogo de la Exposición *Floridablanca 1728-1808 La utopía reformadora*. Murcia 18 septiembre/8 de diciembre de 2008, p.62.
- HERNANDEZ MONTALBAN, F. *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Madrid, Biblioteca Nueva-Univ. Valencia, 1999.
- HERNANDO, Javier *Las Bellas Artes y la Revolución de 1868*, Oviedo, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1987.
- *El pensamiento romántico y el arte en España* Madrid, Cátedra, 1995.
- HERR, Richard, “El significado de la desamortización en España”, *Moneda y Crédito*, Madrid, diciembre de 1974.
- “Hidalguía y desamortización bajo Carlos IV”, en *Desamortización y Hacienda Pública*. Jornadas celebradas en 1982, Ministerio de Agricultura-Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, Tomo II, pp.463-478.
- *La Hacienda Real y los cambios rurales en la España del Antiguo Régimen*. Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991.
- HERVADA, J. La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico *Ius Canonicum*, 2, 1962
- HESSE, Konrad, *Derecho Constitucional y derecho privado*. Cuaderno Civitas, Madrid, 1995.
- HILBERSEIMER, Ludwig *La arquitectura de la gran ciudad*, Barcelona, 1927/1979.
- HOBBSBAWN, Eric John *Nación y nacionalismos desde 1780*, Barcelona, Crítica, 1991.
- HONORES, Renzo, Titularidades y políticas legales: El caso del Patrimonio Cultural de Perú. *Patrimonio Cultural y Derecho*, 4, Madrid, 2000.
- HONOUR, H. *El Romanticismo*. Madrid, Alianza Forma, 1981
- IGLESIAS, Carmen El fin de siglo: la entrada en la contemporaneidad, VV.AA. *Visiones de fin de siglo*, Taurus, Colección Pensamiento, Madrid, 1999.
- IGLESIAS FERREIRÓS, Aquilino, El código civil (Español) y el (llamado) Derecho foral gallego en PETIT, Carlos *Derecho Privado y Revolución Burguesa*, Monografías Jurídicas. Marcial Pons, Madrid, 1990.
- IGUACEN BORAU, D. *El Patrimonio Cultural de la Iglesia*, Madrid, 1982.
- El patrimonio cultural de la Iglesia, al servicio del pueblo en *Revista española de Derecho Canónico*, Vol.41, Núm.119, 1985, pp.485-491.
- INCLAN VALDES, J.M. *Apuntes para la historia de la arquitectura y observaciones sobre la que se distingue con la denominación de gótica*. Madrid, 1833.
- ISAC, Angel La ciudad de Granada y el palacete de los mártires a mediados del siglo XIX en *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, N°XXIV, 1993, Departamento de Historia del Arte, pp.215-242.
- “La ponencia de D. Leopoldo Torres Balbas en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos de 1919”, *Cuadernos de Arte*, N° 20, Universidad de Granada, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1989, pp.195-212.



- JANER, Florencio “Aprecio en que se tenían los objetos científicos y arqueológicos en el reinado de Carlos III y Carlos IV”, *Revista de España*, 1870, XVII-XVIII, pp.220-227. Boletín Bibliográfico Tomo XXI.
- JELLINEK, G. *Teoría general del Estado*, Granada, Comares, 2000.
- JIMENEZ DE CISNEROS, Francisco Javier *Obras públicas e iniciativa privada*. Editorial Montecorvo, Madrid, 1998.
- JIMENEZ MARTIN, Alfonso “Los Caños de Carmona. “Documentos olvidados”. *Historia, Instituciones, Documentos*, Nº2, 1975, pp.317-328.
- JIMENO MARTINEZ, Alfredo; DE LA TORRE ECHEVARRI, José Ignacio *Numancia, símbolo e historia*. Akal, 2005.
- JORDAN DE ASSO, Ignacio y DE MANUEL, Miguel *Instituciones del Derecho Civil de Castilla, enmendadas, ilustradas y añadidas conforme a la Real Orden de 5 de octubre de 1802 (...) Tomo 1, 7ª edición*, Imprenta de Don Tomás Albán, Madrid, 1806.
- JORDAN DE URRIES Y DE LA COLINA, Javier “El diplomático José Nicolás de Azara, protector de las Bellas Artes y de las letras” *Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar*, LXXXI, 2000.
- “El coleccionismo del ilustrado Bernardo Iriarte” *Goya*, Núm. 319-320, 2007, pp.259-280.
  - “Azara, coleccionista de antigüedades, y la Galería de estatuas de la Real Casa del Labrador en Aranjuez”, *Reales Sitios*, Revista del Patrimonio Nacional, XL, 156, 2003.
- JORDANA DE POZAS, Luis “Los cultivadores españoles de la Ciencia de la Policía”, *Revista de Estudios de la Vida Local*, nº.17, 1944.
- “Ensayo de una teoría de fomento en el Derecho administrativo” *Revista de Estudios Políticos*, 48, 1949.
- JOVELLANOS, Gaspar Melchor, *Discurso sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra historia y antigüedades*, Madrid, 1755, 1969.
- JOVER ZAMORA, José María *Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España Contemporánea*, Ateneo, Madrid, 1956.
- *Prólogo de Historia de España T.XXXIV*, pp. LXXXV. Madrid, 1991.
- KURTZ SHAEFER, Guillermo; VALDES SIERRA, Juan M. “Museos, investigación y provincia, aproximación de los museos provinciales en España” *Revista de Museología*, 30-31, 2004.
- LACOMBA, J.A. *La I República. El trasfondo de una revolución fallida*. Madrid, Guadiana, 1973.
- LACUESTA, Raquel (Coord.) *Diputación de Barcelona: setenta años de catalogación y conservación de monumentos*. Diputación de Barcelona, 1985.
- LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente “Bases y medios prácticos para hacer el inventario de los monumentos arquitectónicos de España” *IV Congreso de Arquitectos*, Bilbao, 1907.
- LANTIER, R. CABRE, J. *El santuario ibérico de Castellar de Santisteban*. Memoria de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas Prehistóricas. Madrid, 1917.
- LARA ESCOZ, José Ignacio La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Sevilla en el siglo XIX. Una perspectiva arqueológica, en DEAMOS, Belén; BELTRAN FORTES, José (editores) *Las instituciones en el origen y desarrollo de la arqueología en España*, Spal Monografías X, Sevilla, 2007.
- LARRA, Mariano José de, “De las antigüedades de Mérida”. Primer artículo. *Revista Mensajero*, 22 de mayo de 1835.
- “Las antigüedades de Mérida. Segundo Artículo”. *Revista Mensajero*, 30 de mayo de 1835. Artículos selectos, Madrid, 1995.
  - “Conventos españoles. Tesoros artísticos encerrados en ellos”, en *Revista Mensajero*, 156, 3 de agosto de 1835.
- LASARTE, Carlos *Propiedad y derechos reales de goce. Principios de Derecho Civil IV*, Marcial Pons, 9ª edición, Madrid, 2009.
- LASSO GAITE, Juan Francisco *Crónica de la codificación española. Codificación Civil (Génesis e historia del Código) Vol.IV. Tomo II*, ed. Ministerio de Justicia, Madrid, 1994.
- LAUGIER, Marc-Antoine *Ensayo sobre la arquitectura*, Fuentes de Arte, 14, 1753/1999.
- LAYNA SERRANO, Francisco, “El Monasterio de Ovila, en Norteamérica”, en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 1941, pp.484-490.
- *El Monasterio de Ovila*, Guadalajara, 1998.



- LECOUNA PRATS, Emilio *La liberalización de la propiedad a finales del antiguo régimen. Centro y periferia del proceso desamortizador y redentor de censos perpetuos en tiempos de Carlos IV*. Universidad de Málaga, Estudios y Ensayos, 93.
- LE COBUSIER, *Hacia una arquitectura*, 1923/1978.
- LEFEBVRE, G. *El nacimiento de la historiografía moderna*. Barcelona, 1974.
- LE GOFF, Jacques Le *El orden de la Memoria* Paidós Ediciones, S.A. España, 1991 (1977).
- LENTISCO PUCHE, José *El castillo de Vélez Blanco, 1506-2006, Imagen y memoria*, Almería, Centro de Estudios Velezanos, 2007.
- LEON, Aurora *El Museo. Teoría, praxis y utopía*. Cuadernos Arte Cátedra. Madrid, 2000.
- LEON, Pierre. *Les monuments historiques: conservation, restauration*; París, 1917.
- *La Guerre et l'architecture: la renaissance des ruines: maisons, monuments*, Paris, 1918.
- *La vie des monuments français. Destruction, Restauration*, París, Ed. Picard, 1951.
- LIPE, William D. *Value and meaning in cultural resources* en CLEERE, H. (ed.), *Approaches to the archaeological heritage*, Cambridge, N. Y., Cambridge University Press, 1984.
- LUIS, Jean-Philippe *La década ominosa (1823-1833), una etapa desconocida en la construcción de la España Contemporánea*, *Ayer*, 41, 2001, pp.85-108.
- LOOS, Adolf *Arquitectura*, 1910.
- LOBATO GOMEZ, José Miguel *Propiedad privada del suelo y derecho a edificar*. Madrid, Editorial Montecorvo, 1989.
- LOPEZ BARGA DE QUIROGA, J; RODRIGUEZ RAMOS, L., RUIZ DE GORDEJUELA LOPEZ, L. *Códigos penales españoles. Recopilación y concordancia*. Madrid, 1988.
- LOPEZ BRAVO, Carlos *El patrimonio cultural en el sistema de derechos fundamentales*. Sevilla, 1999.
- LOPEZ GOMEZ, Pedro *La construcción de un sistema nacional de archivos (1858-1936) en DE DIOS, Salustiano; INFANTE, Javier, ROBLEDO, Ricardo, TORIJANO, Eugenia (Coord.), Historia de la propiedad. Patrimonio Cultural*. Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, Salamanca, 28-31 de mayo de 2002.
- LOPEZ MARTINEZ, Antonio Luis “El patrimonio económico de los jesuitas en el reino de Sevilla y su liquidación en tiempos de Carlos III”. *Archivo Hispalense*, 1988, Tomo LXXI, Núm. 217, pp. 37-55.
- LOPEZ NAVIO, José Luis “La gran colección de pinturas del marqués de Leganés” Madrid, *Analecta Calsanctiana*, 1962.
- LOPEZ RAMON, F. “Reflexiones sobre la indeterminación y amplitud del patrimonio cultural” AA.VV. *Patrimonio Cultural, Actas del III Encuentro Interdisciplinar sobre Historia de la Propiedad* del 28-31 de mayo de 2003 en Salamanca, Madrid, 2003.
- LOPEZ RODRIGUEZ, Juan Ramón *El desarrollo de los museos arqueológicos en Andalucía durante el siglo XIX en DEAMOS, María Belén; BELTRAN FORTES, José (Editores), Arqueología fin de siglo. La arqueología española de la segunda mitad del siglo XIX. I Reunión Andaluza de Historiografía Arqueológica, Spal Monografías, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2002.*
- “El coleccionismo arqueológico. Las piezas italicenses en la historia del coleccionismo sevillano” en BELEN DEAMOS, María; BELTRAN FORTES, José *Las instituciones en el origen y desarrollo de la arqueología en España*. Sevilla, 2007.
- *Historia de los museos de Andalucía 1500-2000*. Universidad de Sevilla, Sevilla, 2010.
- LOPEZ RODO, Laureano *El patrimonio nacional*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científica, 1954.
- LOPEZ TRUJILLO, Miguel Ángel, *Patrimonio. La lucha por los bienes culturales españoles (1500-1939)*, Madrid, 2006.
- LOPEZ SANCHEZ, José M<sup>a</sup> “El Centro de Estudios Históricos y los orígenes de un moderno sistema científico español”, en PUIG-SAMPER (ed.), *Tiempos de Investigación, JAE-CSIC, Cien años de ciencia en España*, Madrid, 2007, pp.121-127.
- LOPEZ-YARTO, Amelia; MATEO GOMEZ, Isabel *Gestión del Catálogo del Museo Nacional de pintura en el siglo XIX, VII Jornada de Arte, Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*, Madrid, 22-25 de noviembre de 1994. Actas Madrid, 1995.
- LORENZO MORILLA, J. *La creación del Museo Arqueológico de Sevilla Atrio*, 4, pp. 139-145.

- LLEO CAÑAL, V. *La Sevilla de los Montpensier, Segunda Corte de España*, Sevilla, Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, 1997.
- LLINARES I GÓMEZ, Joan Titularidad de los museos. La gestión de los museos en PEÑUELAS REIXACH (Ed.) Lluís, *Administración y dirección de los museos: Aspectos jurídicos*. Fundación Gala-Salvador Dalí, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2008.
- LLOMBART, Vicent Una monarquía ilustrada en tiempo de la Revolución: la alternativa de Jovellanos (1788-1808) en DE LORENZO ALVAREZ, Elena La época de Carlos IV (1788-1808)
- LUBBLINER-MATTATIA, Sabina, *Monge et le objetsd'artd'Italie*, Bulletin de la Sabix, Societé des amis de la bibliothéque et de l'histoire de l'Ecolepolythecnyque
- LUZON NOGUÉ, José María *La Real Academia de Arqueología y Geografía del Príncipe Alonso* en MARCOS POUS, A (Coord.), *De gabinete a Museo: tres siglos de historia*. Madrid, 1993.
- *Sevilla, la vieja. Un paseo histórico por las ruinas de Itálica*. Fundación Focus-Abengoa, Sevilla, 1999.
  - "Isabel de Farnesio y la Galería de Esculturas de San Idelfonso", en RODRIGUEZ RUIZ, D. *El Real Sitio de San Idelfonso. Retrato y escena del Rey*, Madrid, 2000.
  - Museo del Prado, Madrid, en *Los grandes museos históricos*, Edición conmemorativa del 175 aniversario del Museo del Prado, Fundación Amigos del Museo del Prado, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.
- MANJON MERGELINA, Regla "El mejor mosaico de Itálica" *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 67, 1915.
- MACARTNEY, Hilary La colección de arte español formada por Sir William Stirling Maxwell, en ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M<sup>a</sup> DOLORES, *Colecciones, Expolio, Museos y Mercado Artístico en la España de los siglos XVIII y XIX*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, pp.236-264.
- MCCELLAN, Andrew, *Inventing The Louvre: Art, Politics, and the Originsof the modern museum in Eighteenth-Century París*, University of California Press, 1999.
- MACARRO, J.M. Federico Rubio, político y parlamentario. Una manera de entender la Revolución, en *Medicina y Sociedad en España del siglo XIX. Una aproximación a la obra de Federico Rubio y Galí*. VV.AA. Cádiz, 2003.
- MAGAN PERALES, José María *La circulación ilícita de los bienes culturales*. Editorial Lex Nova, 1<sup>o</sup> edición, julio 2001.
- MAIA, María Helena "De bienes de la Nación a Monumentos Nacionales. Romanticismo y Patrimonio Arquitectónico en Portugal" *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie VII, Historia del Arte, 2005-2006.
- MAIER, Jorge *Epistolario de Jorge Bonsor (1886.1930)*, Madrid, 1996.
- *Comisión de Antigüedades. Comunidad de Madrid. Catálogo e índices. Real Academia de la Historia*, Madrid, 1998.
  - *Noticias de Antigüedades de las Actas de Sesiones de la Real Academia de la Historia (1792.1833)*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2003.
  - *Noticias de Antigüedades de las actas de sesiones de la Real Academia de la Historia (1834-1874)*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2008.
  - "II Centenario de la Real Cédula de 1803. La Real Academia de la Historia y el inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico y Monumental en España", *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 200, Cuaderno 3, 2003, pp.439-473.
  - "La Real Academia de la Historia y la arqueología española en el siglo XIX", *Eres Arqueología/Bioantropología*, Santa Cruz de Tenerife, 12, febrero 2004.
  - Las Antigüedades en la España de Fernando VII: De la Academia a la Arqueología (1814-1833) en *Revista de Historiografía*, 5, III, febrero, 2006.
  - "La enseñanza de la Arqueología y sus maestros en la Escuela Superior de Diplomática", *Revista General de Información y Documentación*, 2008, pp.173-189.
  - Renovación e institucionalización de la investigación arqueológica en el reinado de Fernando VI (1746-1759), Corona y arqueología en el siglo de las Luces, Madrid, Palacio Real, abril-julio, 2010, Patrimonio Nacional, 2010, pp.147-157.

- “Las Antigüedades en Palacio: Ideología y función de las colecciones reales de arte antiguo en el siglo XVIII” *Sitios Reales, Revista del Patrimonio Nacional*, Año XLVII, Núm.183, Primer Trimestre de 2010.
- MAIER ALLENDE, Jorge La Comisión de Antigüedades de la real Academia de la Historia en MAIER ALLENDE, Jorge; ALMAGRO GORBEA, Martín *250 años de arqueología y patrimonio: documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de la Real Academia de la Historia: estudio general e índices*, 2003, pp.27-52.
- MAIER ALLENDE, Jorge; SALAS ALVAREZ, Jesús Los inspectores de antigüedades de la Real Academia de la Historia de Andalucía en *Las Instituciones en el origen y desarrollo en la arqueología en España*. Universidad de Sevilla, 2007.
- MARAVALL José A. La fórmula política del Despotismo Ilustrado en *Estudios de Historia de Pensamiento Español (siglo XVIII)*, Mondadori, Madrid, 1991.
- El sentimiento de la nación en el siglo XVIII: la obra de Forner, *Estudios de la historia del pensamiento español*, Madrid, 1991.
- MARCHÁN FIZ, Simón *La poética de las ruinas, un capítulo casi olvidado en la historia del gusto* en Fragmentos, 1985.
- MARICHAL, Carlos *La Revolución liberal y los primeros partidos políticos españoles*. Madrid, Cátedra, 1980.
- MARINAS Cristina La Galería Española del Rey Luis Felipe, *Academia*, nº 57, 2º semestre de 1983.
- MARQUEZ VILLANUEVA, Francisco *El concepto cultural alfonsí* Madrid, Mafre, 1994.
- MARTÍ, Victor, “Reforma de la Puerta del Sol, *Revista de Obras Públicas*”, 1859, 5, pp.53-59; 7, pp.77-80; 8, pp.89-91; 11, pp.125-129; 16, pp.189-194; 18, pp.213-215; 20, pp.237-238.
- MARTÍ Y DE EIXALA, Ramón *Tratado elemental del Derecho civil Romano y Español*, Imprenta de Joaquín Verdaguer, Barcelona, 1838.
- MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. *Problemática de la Desamortización en el arte español*. Actas del II Congreso Español de Historia del Arte, 11 14-X-1978, Valladolid, 1978, pp.16-29.
- MARTÍN MATEO, R. “La propiedad monumental”, *Revista de Administración Pública*, 49, 1966.
- MARTÍN MORENO, J.I; REGUERAS GRANDE, F. “El bote de Zamora: historia y patrimonio” *De Arte* 2, 2003, pp.203-223.
- MARTÍN RETORTILLO, Cirilo “Breves notas sobre la expropiación forzosa por causa de utilidad pública”, *Revista de Legislación*, Año LXXI, Tomo 142, Madrid, Editorial Reus, 1923, p.55-78.
- “La riqueza artística municipal y la reforma interior de las poblaciones” *Revista de Estudios de la Vida Local*, n.40, 1948.
- MARTÍNEZ BLANCO, A. “La conservación del patrimonio artístico eclesiástico”, *Revista de Administración Pública*, N.75, 1974, pp.429-474.
- “Las cosas destinadas al culto en el derecho canónico” *Revista Española de Derecho Canónico*, Vol.43, Núm.121, julio-diciembre, 1986
- *El Patrimonio Artístico y Documental eclesiástico como parte del patrimonio nacional en España*.
- “Naturaleza de los bienes del Patrimonio Cultural Eclesiástico” *Anuario del Derecho Eclesiástico del Estado*, 13, 1997.
- MARTÍNEZ CUADRADO, M. “El horizonte político de la Revolución Española de 1868”, *Revista de Occidente*, núm. Extraordinario dedicado a la Revolución de 1868, 67, octubre de 1968.
- MARTÍNEZ GARCÍA, Luis, “El Archivo de Simancas en el Antiguo Régimen: secreto, patrimonio, justificación y legitimidad real”, *Boletín de Anabad*, Madrid, XLIX, n.2, 1999, pp.77-166.
- MARTÍNEZ JUSTICIA, María José *Antología de textos sobre Restauración*, Universidad de Jaén, 1996.
- *La restauración de bienes culturales en los textos normativos: selección, traducción y estudio crítico de documentos normativos internacionales y nacionales* Granada, Comares, 2009.

- MARTINEZ LEIVA, Gloria; RODRIGUEZ REBOLLO, Ángel “La colección de pintura de la Reina Mariana de Neoburgo” en *Goya*, 286, Madrid, 2002.
- MARTINEZ MARINA, Francisco *Ensayo histórico-crítico sobre Legislación y principales Cuerpos legales de los Reinos de León y Castilla, especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de Don Alonso el Sabio*, Tomo 1. Imprenta de D.E. Agudo, Madrid, 1834.
- MARTINEZ RODRIGUEZ, Andrés José Musso Valiente y la creación de un museo de antigüedades, en *Actas del Congreso Internacional sobre José Musso Valiente y su época (1785-1838): la transición del Neoclasicismo al Romanticismo*, 17 y 19 de noviembre de 2004. Vol.1. 2006, pp.111-120.
- MARTINEZ RUIZ, M.J. “La Casa Miranda de Burgos. La defensa ante la posible salida al extranjero de su patio” *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, Valladolid, 66, 2000, pp.182-197.
- “Luces y sombras del coleccionismo artístico en las primeras décadas del siglo XX: El conde de las Almenas” *Goya*, Núm.307-308, 2005, pp.284-285.
- *La enajenación del patrimonio de Castilla y León (1900-1936)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 2008, pp.51-61.
- “La diplomacia española y estadounidense y su relación con el comercio de antigüedades en la primera mitad del siglo XX” en *Goya*, 329, octubre-diciembre, 2009, pp.328-330.
- MARTINEZ TORNERO, Carlos A. *Carlos III y los bienes de los jesuitas. La gestión de las temporalidades por la Monarquía Borbónica (1767-1815)*. San Vicente de Raspeig, Universidad de Alicante, 2010.
- MARTORELL I TERRATS, Jerónimo “El patrimonio artístico nacional” *Arquitectura*, Núm.14, 1919, pp.149-161.
- MARIN-MEDINA, José *Grandes coleccionistas. Siglos XIX y XX*. Edarcon. Ediciones de Arte Contemporáneo. Madrid, 1988.
- MARX, Karl, *Manuscritos, Economía y sociedad*, Madrid, Alianza, 1986.
- MATEOS GAGO, Francisco “La cuestión de los derribos” , *Opúsculos*, T. I, 1869, pp.179-187.
- “Carta al Excmo. Sr. Ministro de Fomento con motivos de su decreto sobre incautación de cosas eclesiásticas del 1º de enero de 1869”, *Opúsculos*, T. I, 1869, pp.171-172.
- MATEU IBARS, Josefina “La antigua librería del Colegio de San Pablo en el siglo XVIII: un principal fondo de la Biblioteca de la Universidad de Granada” *Cuadernos de Estudios medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas*, 17, 1992, pp.265-277.
- MATILLA, María Jesús y FRAX, Esperanza “Libertad de industria y comercio. El derecho de la propiedad” *Ayer*, 34, 1999, Derechos y Constitución.
- MATUTE Y GAVIRA, Justino *Bosquejo de Itálica o apuntes que juntaba para su historia*, Sevilla, 1827. Reimpresión, Portada Editorial, Sevilla, 1994.
- MAYANS Y SICAR, Gregorio, Arte de pintar, en *Obras Completas*, V, Ensayos y Varia, Ayuntamiento de Oliva, 1986.
- MEDEROS MARTIN, Alfredo “Islas canarias”, en MAIER, Jorge; ALMAGRO, Martín *250 años de arqueología y patrimonio: documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de la Real Academia de la Historia: estudio general e índices*, Madrid, 2003,
- “Análisis de una decadencia. La arqueología española del siglo XIX. I, El impulso isabelino (1830-1867)” *CAPAUM*, 36, 2010.
- MEDINA DOMINGUEZ, Alberto, *Espejo de sombras. Sujeto y multitud en la España del siglo XVIII*, Marcel Pons Historia, Madrid, 2009.
- MEJIAS, Juan Luis, “Legislación sobre el Patrimonio Cultural” en Colombia, *Patrimonio Cultural y Derecho*, 3, 1999.
- MELGAR CAMARZANA, Manuel; LÓPEZ WEHRILI, Silvia A. *Los Archivos Militares. Qué son y cómo se tratan*, Gijón, Trea, 2010.
- MELIDA ALIÑARI, José Ramón, “Excavaciones en Itálica” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año IX, Febrero de 1905, N.2, pp.89-92, pp.283-284. “Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional en 1920: notas descriptivas” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Madrid, Tercera Epoca, T.XLIII (enero-diciembre, 1922), pp.161-172 y 341-353.
- “Los Velázquez de la Casa de Villahermosa”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Año IX, Febrero de 1905, N.2, pp.89-92.
- “El mosaico emporitano del Sacrificio de Ifigenia”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, Tomo LXI, 1912, pp.123-125.
- “Tesoro de Aliseda”, *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, 1921, pp.96-97.



- “Relación de los Monumentos Españoles, declarados nacionales o arquitectos-artísticos y de los que en uno u otro concepto considera merecedora de serlos”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Segunda Epoca, Año XX, Núm.79, Madrid, 30 de septiembre de 1926.
- MENENDEZ FLORES, María Luisa *La huella del Marqués de la Vega Inclán en Sevilla*, Arte Hispalense, 85, Diputación de Sevilla, Sevilla, 2008.
- MENDO CARMONA, Concepción “El largo camino de la Archivística: De práctica a ciencia”. Signo. *Revista de Historia de la Cultura Escrita*. Universidad de Alcalá de Henares, 2, 1995, pp.113-132.
- MERCADER RIBA, J. “La desamortización en la España de José Bonaparte” *Hispania*, 122, 1972, p.587-616.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel, “El Monasterio de San Bernardo de Sacramenia” en *Boletín de la Real Academia de San Fernando*, primer semestre de 1982, Núm.54, p.123.
  - “El cincuentenario de la muerte de Arthur Byne”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, Segundo Semestre de 1985, Núm.61, pp.147-210.
  - “La reja de la Catedral de Valladolid en Norteamérica” *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, Tomo 53, 1987, pp.446-453.
  - “Arthur Byne, el saqueador” *Descubrir el arte*, N° 32, 2001, pp.102-104
  - “La colección de arte del Conde de las Almenas”, *Descubrir el arte*, 44, octubre de 2002, p.98.
- MERLOS ROMERO, María Magdalena “Patrimonio inmueble de Aranjuez: su evolución en el siglo XIX” *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie VII, Historia del Arte, Año 1995, n.8.
- MEYER, Karl *El saqueo del pasado: historia del tráfico internacional ilegal de obras de arte*, México, 1990.
- MEZZETI, Luca *La tutela deibeniculturalinell’ordinamento británico*, en MEZZETTI, Luca, I beniCulturali, Padua, 1995.
- MIGUEL ALONSO, Aurora *La Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992, tesis doctoral.
- MIGUELEZ, Lorenzo; SABINO, Alonso y CABRERO, Marcelino *Código de Derecho Canónico* (1917), Biblioteca de Autores Cristianos, 2009.
- MITJANA DE LAS ROBLAS, R. *Estudios históricos sobre las Bellas artes en la Edad Media, Arquitectura siglos XIII-XIV-XV en El siglo pintoresco*, 1845.
- MOLAS RIBALTA, Pere De la Junta de Comercio al Ministerio de Fomento, *Actas del IV Symposium de historia de la Administración* Madrid, 1983, pp.529-556.
- MOLEON GAVILANES, P. Problemas de salubridad pública. El vientre de Madrid, en AA.VV. *Carlos III, Alcalde de Madrid*, Madrid, 1988.
- MONTÉS, Vicente *La propiedad privada en el sistema del derecho civil contemporáneo*, Editorial Civitas, 1980.
- MORA RODRIGUEZ, Gloria “Arqueología y política: el desarrollo de la arqueología española en su contexto histórico”, *Trabajos de Prehistoria*, Vol.52, N.1, 1995, pp.25-38.
  - “La arqueología en las revistas de arte del siglo XIX”, VII Jornadas de Arte. *Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*. Madrid, 22-25 de noviembre de 1994 (Madrid, 1995), pp.161-170.
  - “Arqueología y poder en la España del siglo XVIII”, *Historiografía de la arqueología y de la historia antigua de España (siglos XVIII-XX)*, Congreso Internacional, Madrid, 13-16 de diciembre de 1988, pp.31-32.
  - *Historias del mármol. La arqueología clásica en el siglo XVIII. La arqueología clásica en el siglo XVIII*, Editorial Madrid Polifermo, 1998.
  - “Las academias españolas y la arqueología en el siglo XVIII: el modelo francés”, en MORA RODRIGUEZ, Gloria (Coord.) *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*, 1997, pp.36-46.
  - “La arqueología en España durante el Renacimiento y la Ilustración”, *Zona Arqueológica*, N°.3, 2004, pp.17-20.
  - “Coleccionismo arqueológicos y estudios anticuarios en la Andalucía de los siglos XVI y XVIII” AMORES CARREDANO, Fernando; BELTRÁN FORTES, José, FERNANDEZ LACOMBA, Juan, *El rescate de la Antigüedad Clásica en Andalucía*, Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2008, pp.31-40.



- “El coleccionismo anticuario en España en la primera mitad del siglo XIX” CACCIOTTI, Beatrice (Coord.), *El XIV duque de Alba coleccionista y mecenas de arte antiguo y moderno*, 2011, pp.17-40.
- MORA RODRIGUEZ, Gloria; TORTOSA, Trinidad “La actuación de la Real Academia de la Historia sobre el patrimonio arqueológico: ruinas y antigüedades” en *Archivo Español de Arqueología*, Vol.69, Num.173-174, 1996, pp.191-218.
- MORALES, A. *Patrimonio Histórico-Artístico. Conservación de bienes culturales*, Conocer el Arte, Madrid, Historia 16, 1996.
- MORALES FOLGUERA, J.M. *Málaga en el siglo XIX. Estudios sobre su paisaje urbano.*, Málaga, Departamento de Historia del Arte, 1982.
- MORALES FOLGUERA, J.M. “La Alcazaba de Málaga en el siglo XIX. Entre la utopía y la realidad”. *Cuaderno de Arte de la Universidad de Granada*, XVI, pp.427-445.
- MORAN TURINA, José M. “Arqueología y coleccionismo de antigüedades en la corte de Felipe II”, en *Catálogo de la exposición Adán y Eva en Aranjuez. Investigaciones sobre la escultura en la Casa de Austria*, Museo del Prado, Abril/Mayo, 1992.
- De Palomino a Cean, los orígenes de la historia del arte español, en BERMUDEZ, Cean, *Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España*, Madrid, 2001.
- MORAND J.-DEVILLER, Esthétique et droit de l’urbanisme *Mélangés René Chapus*, París, 1992.
- MOREU BALLONGA, José Luis, *Ocupación, hallazgo y tesoro*, Barcelona, Bosch, 1980.
- MOREL D’ARLEUX, Antonia Origen y vicisitudes de cuatro óleos inéditos del siglo XVII que pertenecieron a la colección real, en *Goya*, Madrid, 1999, pp.72-73.
- MORENO ALONSO, Manuel. *Historiografía romántica española. Introducción al estudio de la historia en el siglo XIX*. Sevilla, 1979.
- *La Sevilla Napoleónica*, Alfar, Sevilla, 1995.
- *José Bonaparte. Un republicano en el trono de España*. La Esfera de los Libros, Madrid, 2008.
- La Guerra de la Independencia: la bibliografía del bicentenario *Historia Social*, 64, Madrid, 2009.
- MORENO ANTON, María G. *La enajenación de bienes eclesiásticos en el ordenamiento jurídico español* Universidad Pontificia, Salamanca, 1987.
- MORENO TRUJILLO, Eulalia *La protección jurídico-privada del medio ambiente y la responsabilidad por su deterioro*, Barcelona, 1991.
- MORRAS ETAYO, José Luis, “La normativa particular de la Iglesia en España sobre el archivo histórico diocesano” *Revista Española de Derecho Canónico*, Vol.60, Núm.154, Enero-junio, 2003, pp.229-254.
- MOTILLA, Agustín *La Administración española en materia religiosa (1808-1977)*, Editorial Comares, Granada, 2009.
- MOXÓ, Salvador de, *La disolución del régimen señorial en España*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Historia Moderna, Madrid, 1965.
- MUNCK, Thomas *Historia social de la Ilustración*, Crítica, Barcelona, 2001.
- MUÑOZ FELIU, Miguel C. “Liberalismo, desamortización y política bibliotecaria. El caso valenciano” *Anales de documentación*, Núm.9, 2006, pp.133-141.
- MUÑOZ JIMENEZ, J.M., “Nuevos documentos sobre saneamiento y alumbrado público de Madrid en el siglo XVIII; Las reglas para construir cloacas, de Francisco Sabatini y las Instrucciones para el servicio de la Iluminación” *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, XXII, 1985
- MUÑOZ MACHADO, Santiago *La resurrección de las ruinas (el caso del Teatro Romano de Sagunto)*. Cuadernos Civitas, Madrid, 2002.
- MUÑOZ VILLAREAL, Alberto “Análisis de la normativa y legislación del Patrimonio Cultural de Belice”, *Patrimonio Cultural y Derecho*, 9, 2005.
- NADAL, Jordi, *El fracaso de la industrialización en España 1814-1913*. Barcelona, 1997.
- NAVA RODRIGUEZ, María Teresa “La Real Academia de la Historia como modelo de unión formal entre el Estado y la cultura (1735-1792)” *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, 8, 1987, pp.127-155.
- “Legado arqueológico, academicismo e historia en el setecientos español” *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie VII, Historia del Arte, nº 2, 1989, pp.197-208.

- NAVARRETE MARTINEZ, Esperanza, *La Comisión Central de Monumentos y la Comisión de Monumentos en Biblioteca de arte, arquitectura y diseño: perspectivas actuales*. Barcelona, 1993.
- *La Academia de Bellas Artes y la pintura en la primera mitad del siglo XIX*, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1999.
- NAVARRO, E.J. "Pesas romano-malacitanas" en *Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales*, 9. Vol. 1 pp.65-67.
- NAVASCUES, José María Informe sobre el Disco de Teodosio, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 173, Cuaderno 3, 1976, pp.428-429.
- NAVASCUES BENLLOCH, Pilar; CONDE DE BEROLDINGEN GEYR, Cristina "D.Enrique de Aguilera y Gamboa, Coleccionista y Fundador del Museo Marqués de Cerralbo", *Goya, Revista de Arte*, Núm.267, Madrid, 1998, pp.330-331.
- NAVAS-RUIZ, Ricardo *El Romanticismo español* Salamanca, 1973.
- NIETZSCHE, *Consideraciones intempestivas, Utilidad y perjuicio de la historia para la vida*, 1873.
- NIETO GARCIA, A., *Los bienes comunales*, Madrid, Edersa, 1964.
- *Estudios históricos sobre Administración y derecho administrativo*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1986 NIETO, Alejandro, *Estudios históricos sobre Administración y derecho administrativo*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1986.
- *Historia administrativa de la Regencia de María Cristina. Los primeros pasos del Estado Constitucional*, Barcelona, 2006.
- NOCHLIN, L. *El Realismo*, Madrid, Alianza, 1991 (1971).
- NOIRIEL, Gérard, El ciudadano, en FREVERT, Ute y HAUPT, Heinz-Gerhard (edición de), *El hombre del siglo XIX*.
- NORDENFLYCHT C. *La conservación y restauración de Bienes Inmuebles en Chile: Visión Histórico-Crítica*, ICOMOS-CHILE, Monumentos y Sitios de Chile, Universidad Internacional SEK. Ediciones Altazor, Santiago, 1999.
- NORMAND, Charles Du destin des cathédrales D'Après Le Projet de Separation des Eglises et De L'Etat, L'Ami Les Monuments et Des Art, Tomo XVIII.
- OCAMPO SUAREZ-VALDÉS, Joaquín Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos: empresa e ilustración en el ocaso del Antiguo Régimen (1784-1809) en LORENZO ALVAREZ, Elena (edic.) *La época de Carlos IV*, Oviedo, 2009.
- OLIVER IMPEI y ARTHUR MAS GREGOR (eds.) *The origins of Museums. The Cabinet of Curiosities of sixteenth and seventeenth-century Europe*, Clarendon Press. Oxford, 1985.
- OLMOS, Ricardo "Lecturas del arte antiguo en la literatura española del siglo XIX" en *Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX*, Madrid, 1995, pp.173-175.
- ORDIERE, Isabel *Historia de la restauración monumental en España (1835-1936)* Madrid, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1995.
- *La formación de la conciencia patrimonial: legislación e instituciones en la historia de la restauración arquitectónica en España*, Instituto Juan de Herrera, 1998.
- ORTIZ ROMERO, Pablo *Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos de Badajoz. Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971)*, Mérida, Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Extremadura, 2007
- ORTIZ Y SANZ, J. *Viaje arquitectónico-antiquario de España. Madrid, 1787. Sobre la literatura de viaje en el siglo XVIII*, PIMENTEL, J. Testigos del mundo. Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración. Madrid, 2003.
- PACHECO, H. *El Código Penal concordado y comentado*, Tomo II, 4ª edición Madrid, 1870.
- PAGES, Pelai, *Introducción a la historia. Epistemología, problemas de métodos en los estudios históricos*. Barcanova, Temas Universitarios, 1983.
- PARADA, José Ramón *Derecho Administrativo. III. Bienes Públicos y Urbanismo*. Madrid, Marcial Pons, 2002.
- PAREDES, J. Los Bienios Progresistas y Moderado (1854-1858), en PAREDES, J. (Coord.), *Historia Contemporánea de España (1808-1839)*, Barcelona, 1996, pp.263-270.
- PALOMARES SÁNCHEZ, Bárbara *Antigua Sinagoga de Santa María la Blanca*, Córdoba, 2009.

- PARODI ALVAREZ, Manuel J. "Notas sobre la organización administrativa de las estructuras de gestión del Patrimonio Arqueológico en el Marruecos Septentrional durante el Protectorado (1912-1956)" *Harakleion*, 2, 2009, pp.120-121.
- PASAMAR ALZURIA, G.; PEIRÓ MARTIN, I. "Los orígenes de la profesionalización historiográfica española sobre la Prehistoria y la Antigüedad (tradiciones decimonónicas y tradiciones europeas)" en OLMOS R (Coord.) *Historiografía de la Arqueología y de la Historia Antigua en España (siglos XVIII-XX)*, Congreso Internacional, Madrid, 13-16 de diciembre, 1988. Madrid, pp.73-78.
- PEIRO, I. "La divulgación y la enseñanza de la historia en el siglo pasado: Las peculiaridades del caso español" *Studium*, 2. Teruel, 1990.
- PEIRO MARTIN, I., PASAMAR ALZURIA, G *La Escuela Superior de Diplomática (Los archiveros en la historiografía española contemporánea)*. Madrid, 1996.
- PEREDA ALONSO, Araceli, "Los inventarios del patrimonio histórico-artístico español" en *Análisis e Investigaciones*, 9, 1981, pp.39-40.
- PEREZ-CAMPOAMOR MIRAVED, Enrique *La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Oviedo. Su papel en la consolidación de la arqueología asturiana* en MORA, Gloria; DIAZ-ANDREU, Margarita, Málaga, 1997.
- PEREZ DE ACOSTA, M<sup>a</sup> Teresa, "Consideraciones en torno al concepto y titularidad de los bienes que forma parte del Patrimonio Histórico-Artístico Español" en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Año CXXX, Enero, 1981, 1, Segunda Epoca, Tomo LXXXII.
- PEREZ DE ARMIÑAN Y DE LA SERNA, Alfredo "Una década de aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español" *Patrimonio Cultural y Derecho*, 1, Madrid, 1997, pp.37-45.
- PEREZ ESCOLANO, Víctor "La recepción española de Camilo Sitte" *Cuadernos de Arte*, N<sup>o</sup> XXIII, Universidad de Granada, 1992, pp.483-492.
- PÉREZ GARZON, J.S. La revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico, 1966-1979, en TUÑON DE LARA, M. *Historiografía española contemporánea. X Coloquio de Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad de Pau. Balance y Resumen*. Madrid, 1980, pp.91-138.
- PEREZ DE GUZMAN Y GALLO, Juan "Las colecciones de cuadros del Príncipe de la Paz" *La España Moderna*, T.140, 1900.
- Las alhajas de la Reina, en *Estudios de la vida, reinado, proscripción y muerte de Carlos IV y de María Luisa de Borbón Reyes de España*, Madrid, 1909.
- PEREZ-JUEZ GIL, Amalia *Gestión del Patrimonio Arqueológico*, Barcelona, Editorial Ariel, 2006.
- PEREZ LUÑO, Antonio Enrique *Los Derechos Fundamentales, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 1984.
- *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Tecnos, 9<sup>o</sup>. Edición, 2005.
- PERRAULT, C. *La peinture, poème*, Ed. Jean-Luc Gautier-Gentès, Genève, Droz, 1992.
- PERRIN, Rocío, *El Alcázar de Sevilla en la Guerra de la Independencia. El Museo Napoleónico*. 1<sup>o</sup> edición: septiembre de 2009, pp.166-167.
- PERROT, X. *De la restitution internationale des biens culturels aux XIX et XX siècles: vers une autonomie juridique*, tesis doctoral, Universidad de Limoges, 2005.
- PESET, Mariano "Legislación contra liberales en los comienzos de la década absolutista (1823-1825)", *Anuario de historia del derecho español*, 37, 1967, pp.437-485.
- Propiedad y crédito agrario, en PETIT, Carlos *Derecho Privado y Revolución Burguesa*, Monografías Jurídicas. Marcial Pons, Madrid, 1990.
- "Fundamento ideológico de la propiedad", en ROBLEDO HERNANDEZ, Ricardo; DE DIOS DE DIOS, Salustiano, INFANTE MIGUEL-MOTTA, Javier *Historia de la propiedad en España: siglos XV-XX*. Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, 3-6 de junio de 1998, *Historia del derecho de la propiedad en España*, pp.441-470.
- PESET REIGT, M. "Acerca de la propiedad en el Code", en *Revista Crítica del Derecho Inmobiliario*, año LII, julio-agosto, 1976, núm.515, pp.879-890.
- PESTCHEN, "Principios informadores de los estatutos jurídicos del Patrimonio cultural religioso en los países de Europa Occidental" *Patrimonio Cultural*, Documentación-Información. Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, n.4, 1986, pp.19 y ss.

- PETCHEN, Santiago, *Iglesia-Estado. Un cambio político. Los Constituyentes de 1869*. Madrid, 1974.
- PIACENTI, Marcello *Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo sviluppo della città moderna*, 1916.
- PIERNA Y DE TINEO, Julio *La expropiación forzosa considerada en los principios y en sus modernas aplicaciones*. Madrid, 1908.
- PIQUERAS, J.A. “La revolución burguesa española. De la burguesía sin revolución a la revolución sin burguesía”, *Historia Social*, 24, 1996, pp.95-132.
- POLERO, Vicente, “Colección de pinturas que reunió en su palacio el marqués de Leganés don Diego Felipe de Guzmán (siglo XVII)” *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, VI, Madrid, 1898-1899.
- POMMIER, E., *L'arte della libertà: doctrine et débats de la Révolution française*, París Galimard, 1991.
- POULAT, Emile “Privatización y Liberalización del culto en Francia. La Ley francesa de 9 de diciembre de 1905” *Anuario de Historia de la Iglesia*, Universidad de Navarra, 2005, pp.69-82.
- PRATS, Li *Antropología y patrimonio* Barcelona, 1997.
- PRESAS, Concepción Alternativas legales a una cuestión patrimonial: los bienes artísticos de la Iglesia española, en *Anuario del Derecho Eclesiástico*, 1, 1985, pp.207 y ss.
- PRIETO DE PEDRO, J. Concepto y otros aspectos del patrimonio cultural en la Constitución Española. Homenaje a García de Enterría, Tomo II, Civitas, Madrid, 1991.
- PUGNAIE, Juan Mejoras Locales en *La Alhambra*, 1840.
- PULEO, Alicia H. Los derechos humanos. Un legado de la humanidad en QUESADA, Fernando, *ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la Filosofía Política*. Madrid, 2008.
- QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoine-Chrysostome, *Letres à Miranda sur les déplacements des monuments de l'art de l'Italie*, 1796, edited by Edouard Pommier, París, Maseco, 1989.
- *Lettres à M. Canova sur les marbres Elgin*, Roma, 1818.
- QUEROL FERNANDEZ, M<sup>a</sup> Angeles, Manuel de gestión del Patrimonio cultural, Akal, 2010.
- QUEROL, M<sup>a</sup> Angeles; MARTINES DIAZ, Belén *La gestión del Patrimonio Arqueológico en España* Alianza Universidad Textos, 1996.
- “El Patrimonio arqueológico en la normativa internacional” *Complutum*, N. Extra 6, 1996, pp.295-306.
- QUINTANA LOPEZ, TOMÁS, *Declaración de ruina y protección del patrimonio histórico inmobiliario*, Colección jurisprudencia práctica, Técnos, Madrid, 1991.
- QUIROS LINARES, Francisco “La construcción del centro urbano. Política y especulación en la reforma de la Puerta del Sol (1853-1862)”, *Ería, Revista de Geografía*, 4, pp.81-91.
- *Las ciudades españolas a mediados del siglo XIX*, Sevilla, Trea, 2009.
- QUIROSA GARCIA, M<sup>a</sup> Victoria QUIROS LINARES, Francisco *Las ciudades españolas en el siglo XIX* Valladolid, 1991.
- *Evolución de la tutela de los bienes culturales muebles en España: S.XVIII-XXI*, Granada, 2008.
- RAGGIO, Olga “El patio de Velez Blanco, un monumento señero del Renacimiento”, *Anales de la Universidad de Murcia*, Vol. XXI, 1964.
- RAMIREZ, Juan Antonio *Medios de masas e historia del arte*, Madrid, 1981.
- RAMIREZ DE JUAN, Eloísa “La puerta de Noguera y la casa del presbítero Miguel López de Palma (Jaén)” *Arqueología y Territorio Medieval*, 12.1. Universidad de Jaén, 2005 pp.95-97.
- RAMON FERNANDEZ, Tomás “La Legislación española sobre el Patrimonio Histórico-Artístico. Balance de la situación de cara a la reforma”, *Revista de Derecho Urbanístico*, 60, 1978. – La Administración y el patrimonio histórico inmobiliario, PAU PEDRÓN, Antonio; ALMAGRO, Martín (Coord.) *La protección jurídica del patrimonio inmobiliario histórico* pp.249-268.
- RAMOS MEDRANO, Juan Antonio *Los deberes urbanísticos de los propietarios del suelo*, Madrid, 1996.



- RAMOS ILLAN, José; ROLDAN VERDEJO, Pablo Julio, “Consideraciones sobre los valores históricos y artísticos en los bienes muebles e inmuebles”, *Revista de Derecho Urbanístico*, 106, 1988.
- RAMOS SUAREZ, Manuel Antonio, *Patrimonio Cultural y Desamortización. Marchena 1798-1901*. Diputación de Sevilla, 2008.
- “La ocupación napoleónica y el patrimonio pictórico. La iglesia del hospital de la Santa Caridad de Sevilla” *Goya*, Núm.330, Enero-Marzo, 2010, pp.34-47.
- RAYA RASERO, Rafael *Historia secreta de los derribos de conventos y puertas de Sevilla durante la Revolución de 1868*. Sevilla, 2006.
- RASILLA VIVES, Marcos de “La Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas y la Arqueología Prehistórica en España (1913-1935)” en MORA, Gloria; DIAZ-ANDREU, Margarita *La cristalización del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*. Málaga, 1997, pp.431-437.
- RÉAU, L *Historire du vandalisme. Les monuments détruits de l’artfrançais*, 2 vols., Hachette. París, 1954.
- REDONDO CANTERA, María José “La política bonapartista sobre los bienes artísticos desamortizados del clero regular y su repercusión en un medio provincial: Valladolid, 1808-1813” *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, N.73. Segundo Semestre de 1991.
- RENFREW, C. y BAHN, P. *Arqueología. Teorías, métodos y prácticas*. Madrid, 1998.
- REPRESA, F. “Las primeras excavaciones borbónicas en Pompeya y Herculano” *Revista de Arqueología*, 76, 1987.
- REVUELTA GONZALEZ, P. Manuel *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX, TrienioConstitucional*, C.S.I.C. Escuela de Historia Moderna, Madrid, 1973.
- REYERO, Carlos; FREIXA, Mireia *La pintura de historia en España*. Madrid, Cátedra, 1989.
- *Pintura y escultura en España, 1800-1910*. Madrid, Cátedra, 1995.
- REWALD, J. *Historia del Impresionismo*, Barcelona, Seix Barral, 1972 (2 vols) y 1994.
- RICO GIMÉNEZ, Juan *De la Ilustración al Liberalismo (el pensamiento de Sempere y Guarino)*, Alicante, Universidad de Alicante, 1997.
- RIDLEY Ronald T. To protect the Monuments: The Papal Antiquarian (1534-1870). *Xenia Antiqua*, 1, 1992.
- RIEGL, Alois *La ley de la tutela de los monumentos*. Edición comentada por Aurora Arjones Fernández, Junta de Andalucía, 2007.
- RIVERA BLANCO, José, *Historia de las restauraciones de la Catedral de León: “Pulcha leonina”, la contradicción ensimismada* Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993.
- *Nuevas tendencias en la identificación y conservación del patrimonio*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003.
- *De Varia Restauratione. Teoría e Historia de la Restauración Arquitectónica*, Valladolid, 2007.
- RIVIERE GOMEZ, Aurora Arqueólogos y Arqueología en el proceso de construcción del Estado-nacional español (1834-1868), en MORA, Gloria (eds.) *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*, Universidad de Málaga, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997.
- ROCES FELGUEROSO, Carlos “El puerto de El Musel y el Muelle de Gijón, en relación con el desarrollo de los ferrocarriles mineros” en *IV Congreso Historia Ferroviaria*, Málaga 20-22 de septiembre de 2006, p.10.
- RODRIGUEZ ALCALDE, Leopoldo *El coleccionismo de pintura en España*, Fundación Marcelino Botín, 1990, Conferencia pronunciada en la Fundación Marcelino Botín el día 25 de agosto de 1989.
- RODRIGUEZ DOMINGO, José Manuel “La enajenación de alhajas durante el proceso desamortizador de Mendizábal en Granada (1834-1840)” *Cuadernos de Arte*, Universidad de Granada, N.27, 1996.
- RODRIGUEZ HIDALGO, José María La colección arqueológica de Itálica. Apuntes sobre su ampliación e institucionalización durante el siglo XIX en BELTRAN FORTES, José;



- CACCIOTI, Beatrice y PALMA BENETUCCI, Beatrice (editores), *Arqueología, Coleccionismo y Antigüedad. España e Italia en el siglo XIX*. Universidad de Sevilla.
- RODRIGUEZ MORATA, Federico A. *Derecho de tanteo y retracto en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994*, Aranzadi Editorial, 2ª edición, Navarra, 2001.
- RODRÍGUEZ PASCUAL, Ramón “La protección a las antigüedades” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 1914.
- RODRIGUEZ-TOUBES MUÑIZ, Joaquín Los derechos fundamentales en la constitución española de 1837, en PUY MUÑOZ, Francisco (Coord.) *Los derechos en el constitucionalismo histórico español*, Universidad de Santiago de Compostela, 2002.
- ROLLA, G. Bienes Culturales y Constitución, en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, núm. 2, 1989.
- ROMA VALDES, Antonio, *La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural, Estudios de derecho penal y criminología*, Editorial Comares, Granada, 2008.
- ROMEO MATEO, María Cruz, Lenguaje y política del nuevo liberalismo: Moderados y progresistas, 1834-1845, en BURDIEL, Isabel (ed.), *la política en el reinado de Isabel II*, Ayer, 29, 1998, pp.37-62.
- ROMERO MURUBE, J., *Francisco de Bruna y Ahumada*, Ayuntamiento, Sevilla, 1965.
- ROMERO TALLAFIGO, Manuel *Archivística y archivos. Soportes, edificio y organización*. 3ª edición, Octubre, 1997.
- “Los documentos y el archivo como armas defensivas del linaje, en CASAUS, María Jose, *Jornadas sobre el Señorío Ducado de Híjar: siete siglos de historia nobiliaria española*, 2007, pp.111-142.
  - *De libros, archivos y bibliotecas*, La Palma de Gran Canarias, Gobierno de Canarias, 2008.
- ROSADO PACHECO, Santiago *El Estado administrativo en la España del siglo XIX: Liberalismo e intervencionismo*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Cuadernos y debates, 92, 2000.
- ROMERO RECIO, Mirella “La arqueología en la enseñanza española durante el siglo XIX: nuevas aportaciones a la luz de documentos inéditos” en BELTRAN FORTES, José; CACCIOTI, Beatrice y PALMA VENETUCCI (Editores), *Arqueología, coleccionismo y antigüedad. España e Italia en el siglo XIX*. Universidad de Sevilla, 2006. pp. 581-601.
- ROSE DE VIEJO, Isadora, *Manuel Godoy: patrón de las Artes y coleccionista*. Tesis Doctoral. Ed. Universidad Complutense, 1983, 2 Volúmenes.
- “Cuadros de la colección de Manuel Godoy vendida por la Academia”, *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, primer y segundo semestre de 2001, Números, 92 y 93.
  - “La formación y dispersión de las colecciones artísticas de Manuel Godoy en Madrid, Roma y París (1792-1852)” en *Manuel Godoy y la Ilustración*, Mérida, Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 2001.
  - “Un murillo y un Zurbarán en la colección de Godoy en subastas recientes” *Archivo Español de Arte*, 313, enero-marzo, 2006, 77-99.
  - El Museo Godoyiano: Una oportunidad perdida en RAMOS SANTANA, Alberto en ROMERO FERRER, Alberto (Eds.), *Liberty, Liberté, Libertad El Mundo hispánico en la era de las revoluciones*, Universidad de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, 2010, pp.454-455.
- ROSSI, Ino; O’HIGGINS, Edward *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*. Barcelona, 1981.
- ROSSI PINELLI, O. Carlos Fea e ilChirografo del 1802: cronacagiudiziaria e non, delleprimerebataglia per la tutela delle “Belle Arti”, *Ricerche di Storiadell’arte*, 8 1979.
- ROUSSEAU, Jean Jacques, *Confessions*, Libro IV, 1782, edición de Garnier-Flammarion, Vol.1, París, 1968.
- ROUILLARD, P. “La aportación de los arqueólogos franceses a la Arqueología española ” en *Historiografía de la Arqueología Española. Las Instituciones*. Madrid, 2002, Museo de San Isidro, pp.143-163.

- RUBALCABA BLANCO, Raúl, REDONDO MORALES, Esperanza, GUERRA GARCÍA, Gema, BENITO SANZ, Raquel y CANO RIOFRIO, Cristina, *La Biblioteca Nacional en Documentación de las Ciencias de la Información*, 998, núm.221.
- RUBIO GANDIA, Miguel Angel, *La obra del Gobierno de Mendizábal*, Método Ediciones, Granada, 1996.
- RUBIO MERINO, Pedro *Archivística Eclesiástica*, Sevilla, 1999.
- RUCKER, F. *Les Origines de la conservation des monuments historiques en France (1790-1830)*, París, 1913.
- RUIZ PALOMEQUE, E. *Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante el siglo XIX y XX*. Madrid, 1976.
- RUEDA, Gerardo Bibliografía sobre el proceso desamortizador en España (tercera versión) en *Cuadernos de Investigación Histórica*, 9, 1986, pp.191-220.
- *La desamortización en España: un balance (1766-1924)*, Arco/Libros S.L. Madrid, 1997.
- RUIZ GIMENEZ, *La propiedad, sus problemas y su función social*. Ediciones Anaya, S.A., Madrid, 1961, Vol.
- RUIZ MIGUEL, Carlos El Constitucionalismo cultural, en *Patrimonio Cultural y Derecho*, 5, Madrid, 2001.
- RUIZ PALOMEQUE, E. *Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX*. Madrid, 1976.
- RUMEU DE ARMAS, Antonio, *Origen y fundación del Museo del Prado*, Instituto de España, 1980, pp.118-121.
- SALAS ALVAREZ, Jesús *La arqueología en Andalucía durante la Ilustración (1736-1808)*, Anejos de la *Revista Mainake*, Secretario de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Servicio de Publicaciones Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Sevilla, 2010.
- SAINZ GUTIERREZ, Victoriano *La cultura urbana de la posmodernidad* Ediciones Alfaro, Sevilla, 1999.
- SALAS ALVAREZ, Jesús - *Imagen historiográfica de la antigua Urso (Osuna, Sevilla)*. Sevilla, Diputación de Sevilla, 2002.
- “Coleccionismo erudito en la Andalucía de la Ilustración: los depósitos eclesiásticos de antigüedades” en *Mus-A: Revista de los Museos de Andalucía*, N°8, 2007, pp.140-144.
- *La recuperación del patrimonio Arqueológico de Andalucía durante la Ilustración (1736-1808)*. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla.
- *La Arqueología en Andalucía durante la ilustración (1736-1818)*, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010.
- “El viaje de España del Marqués de Vardeflores. Un intento fallido de catalogación de los monumentos y antigüedades de España” *SPAL, Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla*, N° 19, 2010, pp.9-34.
- SALAS ALVAREZ, Jesús; SANCHEZ-GIL DEL MONTES, Jacinto “La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y la presencia española en la Exposición Internacional de Roma de 1911”, *Zona Arqueológica*, N°3, 2004, pp.401-406.
- SALAS, Ramón Lecciones de Derecho Público Constitucional, Parte I, Lección XI, 1821.
- SALLEILLES, R. La législation italienne relative à la conservation des monuments et objets d'art, en *Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur*, Tomo V, núm.1, París (Francia), 1895.
- SALINERO ALONSO, C. *La protección del Patrimonio Histórico en el Código Penal de 1995*, Ed. CEDECS, Derecho Penal, 1º ed., Barcelona, 1997.
- SAMBRICIO, Carlos Territorio y ciudad en la España de la Ilustración, 2 vols, Madrid, 1991.
- De la ciudad ilustrada a la ciudad liberal en *Ilustración y liberalismo 1788-1814*. Catálogo de la exposición celebrada en Madrid en el Palacio Real octubre 2008/enero 2009, Madrid, 2008.
- SANCHEZ AGESTA, Luis *Historia del constitucionalismo español (1808-1936)*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
- SANCHEZ CANTON, Francisco Javier “La venta de cuadros en 1801: La concepción de Aranjuez y el Descendimiento de Montpellier” *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 1933, pp.165-166.

- “Mas sobre Luciano Bonaparte, coleccionista” *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 1933, pp.261-262.
- “Los antecedentes, la fundación y la historia de la Real Academia de Bellas Artes” *Academia, Boletín de la Real Academia de San Fernando*, nº3, 1952, pp.289-320.
- SÁNCHEZ-GARCÍA, Raquel Vivant Denón en España, en RAMOS SANTANA, Alberto; ROMERO FERRER, Alberto (ed.). *Liberty, Liberté, Libertad. El mundo hispano en la era de las revoluciones*, Universidad de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz, 2010, pp.489-490.
- SANCHEZ-MESA MARTINEZ, Leonardo J. “La restauración inmobiliaria en la regulación del patrimonio histórico” *Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación*. Thomson/Aranzadi, n.10,
- “La restauración inmobiliaria en la regulación del patrimonio histórico” *Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación*. Núm. 10, Thomson, Aranzadi, 2004.
- SANCHO, J.L. *La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo histórico de los Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional*. Editorial Patrimonio Nacional, 1995.
- SANTAMARÍA DE PAREDES, Vicente *La defensa del derecho de Propiedad y sus relaciones con el trabajo*, Tipografía del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1874.
- SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso *Sobre la génesis del derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1845)*, Biblioteca Jurídica Básica, 5, 2006.
- SANZ DE DIEGO, Rafael Mº “La legislación eclesiástica del Sexenio Revolucionario (1868-1874)” *Revista de Estudios Políticos*, Núm.200-201, 1975, pp.195-224.
- SAUNDERS, A., A century of ancient monuments legislation 1882-1892, *The Antiquaries Journal*, 63, 1983.
- SAUNIER, Carlos *Les Conquetes artistiques de la Revolution et de l'Empire*, 1865.
- SCHINER, Larry *La invención del arte. Una historia cultural*. Paidós Estética, Barcelona, 2004.
- SCHROEDER CORDERO, Francisco Arturo Legislación protectora de los monumentos y zonas de monumentos en México en *Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano*. México, UNAM, 1984.
- SEBASTIEN Gérard *Allégories du pouvoir à la cour de Louis XIV*, Ciclo de Conferencias Arte Barroco e ideal clásico, Aspectos del arte cortesano de la segunda mitad del siglo XVII, Roma, mayo-junio, 2003, Real Academia de España en Roma, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior.
- SEGURA, Vicente Juan, *El estatuto jurídico canónico del Patrimonio Cultural de la Iglesia*. Facultad San Vicente Ferrer,
- SEOANE, María Cruz, “El primer lenguaje constitucional español (Las Cortes de Cádiz)”, Madrid, *Moneda y Crédito*, 1968, p.134.
- SERRERA, Juan Miguel, Coleccionismo regio e ingenio capitular *Archivo Hispalense*, 215, 1987, pp.153-166.
- SEVILLA ANDRES, D. Los partidos políticos españoles hasta 1868, en *Revista General de Derecho*, 14, 1958, 166-167, pp.290-299.
- SILVESTRE MARTINEZ, Manuel Librería de Jueces, utilísima y universal para abogados, Alcalde Mayores y Ordinarios, Tomo IV, Imprenta de la Viuda de Eliseo Sánchez, Madrid, 1768.
- SIMON SEGURA, Francisco *Contribución al estudio de la desamortización en España. La desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid*. Madrid, 1969.
- La desamortización española del siglo XIX*, Madrid, 1973.
- SITTE *Construcción de ciudades según principios artísticos* (1889).
- SORIANO GARCIA, Eugenio *Hacia la tercera desamortización (Por la reforma de la ley del suelo)*, Madrid, 1995.
- SPEITKAMP Winfried *Origen y significado de la ley de protección de monumentos para el Gran Ducado de 1902*, Stuttgart, 2003.
- SPERONI, Mario *La tutela dei beni culturali negli Stati italiani preunitari*, I. L'età dell'iriforme, Giuffrè, Milán, 1988.
- STAMPA PIÑEIRO, Leopoldo *Pólvora, plata y boleros. Memorias de testigos y combatientes en la Guerra de la Independencia*, Marcial Pons Historia, Madrid, 2011.

- STENDHAL, *Roma, Nápoles y Florencia*, Valencia, Pretextos, 1817/1999.
- SUAREZ GARMENDIA, José Manuel, “La formación de las plazas de Sevilla a mediados del siglo XIX”, *Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística*, Tomo 63, Nº 192, 1980, pp.239-254.
- *Arquitectura y Urbanismo en Sevilla durante el siglo XIX*, Sevilla, Sevilla, Diputación Provincial, 1987.
  - La aportación de los conventos desamortizados a la creación de tejido urbano de Sevilla en el siglo XIX en *la ciudad oculta: el universo de las clausuras de Sevilla*, Sevilla, Centro Cultural Cajasol, enero-3 de abril 2009, pp.65-89.
- SUAREZ-INCLAN DUCASSI, María Rosa El uso sensato del patrimonio a la luz de su evolución histórica y conceptual en *Tratado de Rehabilitación. Tomo 2. Metodología de la restauración y de la rehabilitación*. Madrid, 1999.
- SUAREZ, Federico, “Nota sobre la administración en el reinado de Fernando VII” en *Actas del Symposium et du Historia de la Administración*, Madrid, 1970, pp.452-460.
- SUREDA, Joan La Colección Cambó. Notas para una valoración artística, en *Colección Cambó*, Caja Barcelona, 31 de enero a 31 de marzo de 1991
- TARRAGA BALDO, Mª Luisa La imagen clásica al servicio del poder en el siglo XVIII; en *La imagen clásica al servicio del poder*, Actas del X Congreso del CEHA, 1994.
- TAYLOR, Francis Henri, *Artistas, príncipes y mercaderes*, Barcelona, 1960.
- TERÉS NAVARRO, Elías “El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga”, *Goya*, Número 319-320, Julio-Octubre, 2007, p.199.
- TOMAN, Jiri *La protection des biens culturels en cas de conflit armé. Commentaire de la Convention et du Protocole de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection de biens culturels en cas de conflit armé ainsi que d’autres instruments de*
- TOMAS Y VALIENTE, F. *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona, Ariel, 1989.
- “Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento de síntesis”, *Moneda y Crédito*, n.131, diciembre 1974, pp.95-160.
  - *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona, 1977.
  - “Reflexiones finales: entre el balance, la crítica y las sugerencias” en *Desamortización y Hacienda Pública*, Ministerio de Agricultura y Alimentación-Instituto de Estudios Fiscales, 2 vols. Madrid, 1986.
  - La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen en la era isabelina y el sexenio revolucionario (1834-1874), tomo XXXIV de *la Historia de España de Menéndez y Pidal*, pp.143-193.
  - *Manual de Historia del Derecho Español*, Madrid, Tecnos, 2010.
- TORMO, Elías “Una nota bibliográfica... y algo más: Acerca del Inventario Monumental de Álava, y vergüenzas nacionales ante unos actos de impiedad histórica”, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, Tomo 23-24 (1915-1916), pp.152-160.
- TORTELLA CASARES, Gabriel Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo en *Historia de España*, Tomo VII (Coord. Manuel Tuñón de Lara). Madrid, 1993.
- TORTOSA, T. y G. MORA “La actuación de la Real Academia de la Historia sobre el patrimonio arqueológico: Ruinas y antigüedades” *Archivo Español de Arqueología*, 69, nº 173-174, Madrid, 1996, pp.191-217.
- TORRES BALBAS, Leopoldo “Legislación, inventario gráfico y organización de los monumentos históricos y artísticos de España” *Anales de Arquitectura*, Nº 7, 1999, pp.117-124.
- “El aislamiento de las catedrales”, *Arquitectura*, Nº 20, 1919, pp.358-362.
  - “La utilización de los monumentos antiguos”, *Arquitectura*, III. Madrid, 1920.
  - “Las murallas que caen”, *Arquitectura*, Nº34, 1922, pp.69-75.
  - “De cómo desaparecen los antiguos palacios de la nobleza castellana” en *Arquitectura*, Nº48, 1923, pp.105-109.
  - “La reparación de los monumentos antiguo en España”, *Arquitectura*, Nº, 165, 1933, pp.1-10; Nº 169, 1933, pp.129-135; Nº 172, 1933, pp.129-135.
  - “El Monasterio Bernardo de Sacramenia (Segovia)”, *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 1941, pp.197-225.
  - “Sobre monumentos y otros escritos” Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1996.



- TORRES DEL MORAL, Antonio, Artículo 44, en *Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución española de 1978*. Tomo IV. Editorial Revista de Derecho Privado, Edersa, Madrid, 1984.
- *Principios del Derecho Constitucional Español*. Madrid, 1992.
- TRAMOYERES, Luis “Legislación vigente en España sobre antigüedades monumentales y artísticas”, *Archivo de Arte Valenciano*, 1919.
- TROMANS Nicolás, “Un museo en Sevilla en 1822”, en *Goya*, 282, Madrid, 2001.
- TUGORES, Francesca; PLANAS, Rosa *Introducción al patrimonio cultural*. Gijón, 2006.
- TUÑÓN DE LARA, Manuel *Historia de España. Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833)* Tomo VII, Barcelona, 1980.
- TUÑÓN DE LARA, M. *La España del siglo XIX español*, Akal. Madrid, 2000; ARTOLA, La *burguesía revolucionaria (1808-1874)*, Alianza Editorial, Madrid, 1973.
- TUSELL GOMEZ, J. “El patrimonio artístico español en tiempos de crisis” en ARGERICH, I. y ARA, J. (eds.), *Arte protegido, Memoria de la Junta del Tesoro Artístico español durante la guerra civil*. Madrid, Instituto de Patrimonio Español, Museo Nacional de Prado, pp.17-25.
- ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés, *Pensamiento artístico español del siglo XVIII. De Antonio Palomino a Francisco de Goya*, Museo Nacional del Prado, Colección Universitaria, Madrid, 2001.
- VARELA SUANZES, Joaquín *Política y Constitución en España 1808-1978*, Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.
- VAQUER CABALLERÍA, Marcos *Estado y Cultura: La función cultural de los poderes públicos en la Constitución Española*, Editorial Centro de Estudios Ramón de Areces, Universidad Carlos III de Madrid, 1988.
- VENTOSA, Víctor J. *Fuentes de la Animación Sociocultural en Europa*: Madrid, Popular, 1993.
- URREA, Jesús *La desamortización y la conservación de los bienes artísticos muebles en Historia de la Propiedad. Patrimonio Cultural*. Madrid, 2003.
- VERGARA, Javier, *Inventario y expropiación de la biblioteca de los jesuitas de Pamplona*, HERNÁNDEZ PALOMO, José J.; DEL REY FAJARDO, José del *Sevilla y América en la Historia de la Compañía de Jesús*, Colección Estudios, Córdoba, 2009.
- VAZQUEZ ASTORGA, Mónica *La pintura española en los museos y colecciones de Génova y Liguria (Italia)*. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008.
- VEGA TORO, Mercedes “El Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta la creación de su primer reglamento” *Mus-A revista de los Museos de Andalucía*, nº.3, 2004, pp.56-64.
- VERDIER, Paul *Le service des monuments historiques, son histoire, organisation, administration, législation (1830-1934)* en *Congressarchéologique de France XCVIII session*, París, 1936.
- VIADA Y VILASECA, S: *Código penal reformado de 1870. Concordado y comentado*. Barcelona, 1874.
- VIGNAU, VICENTE “Manuel Napoli y la colección de cuadros del ex convento del Rosario” *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Tomo IX, noviembre de 1903, pp.372-376; tomo XI, agosto, 1904, pp.192-199; Tomo XII, febrero, 1905, pp.152-156.
- VILLA-URRUTIA, Wenceslao, “Como se recobraron y salvaron de segura ruina los cuadros de Rafael que se llevó José Bonaparte y que son joyas del Museo del Prado”, en *Cultura española*, Revista Trimestral, Madrid, 1907, pp.216-217.
- *España en el Congreso de Viena*, Madrid, 1928.
- VILLAR, Pierre *Iniciación al vocabulario del análisis histórico* Crítica, Barcelona, 1980/1990.
- VILLAR PALASÍ, J.L. *Técnicas remotas del Derecho Administrativo*, Madrid, 2001.
- VIDLER, Anthony *El espacio de la Ilustración: la teoría arquitectónica en Francia a finales del siglo XVIII*, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
- VIÑAS FILOY, Rafael-Gonzalo, “Administración Pública y Antigüedades: El Tesoro de Guarrazar”, en MORA, Gloria; DIAZ-ANDREU, Margarita, *La cristalización del*



- pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España*, Málaga, 1997.
- VIVES, Antonio “Las murallas de Alcudia”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, T.LX, abril de 1912, p.1.
- VOLTAIRE, *Nuevas consideraciones sobre la historia* (1744), incluido en sus *Opúsculos satíricos y filosóficos*, Madrid, 1978.
- YAÑEZ VEGA, Ana “Estudio sobre Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911 y el Reglamento para su aplicación de 1912”, MORA, Gloria (Coord.), *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*, Universidad de Málaga, Servicios de Publicaciones, 1997, pp.423-429.
- “Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español”. A propósito de la Sentencia 181/1998 del tribunal Constitucional, *Civitas. Revista español de derecho administrativo*, N° 103, 1999, pp.459-472.
- YAÑEZ VEGA, Ana; LAVIN BERDONCES, Ana Carmen. “La legislación española en materia de Arqueología hasta 1912: análisis y evolución en su contexto” *Patrimonio Cultural y Derecho*, N° 3, 1999, pp.123-146.
- YARNOZ LARROSA, José y Javier “La restauración del Palacio Real de Olite” en *Arquitectura*, N° 65, Madrid, septiembre de 1924.
- WARD, Philp *La conservación del patrimonio, carrera contra reloj*, Marina del Rey, The Getty Conservation Institute, 1992.
- WILLIAMS GARCIA, Jorge “Protección jurídica de los bienes arqueológicos e históricos”. *Cuadernos del Instituto de Antropología*, Universidad Veracruzana, México, D. F., 1967,
- WINCKELMANN, J. *Historia del arte en la Antigüedad*, Aguilar, Madrid, 1955.
- ZAGREBELSKY, Gustavo *El derecho dúctil. Los derechos, justicia*, Madrid, Trotta, 5ª edición, 2003.
- *Historia y Constitución*. MinimaTrotta, 2005.
- ZEVALLOS, Fr. Fernando de *La Itálica* Sevilla, *Sociedad de Bibliófilos Andaluces*, 1983 (1886), Fundación de Aparejadores de Sevilla.
- ZEVI, Bruno *Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura*.
- ZIEGLER, Edward H. Belleza visual, Estética y Diseño en el derecho urbanístico de los Estados Unidos *Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente*, Enero-Febrero, 1999, 167.
- ZOLO, Danilo *Libertad, propiedad e igualdad* en FERRAJOLI, Luigi Los fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2007.